PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 17

Tomo I

Abril de 2015

Pleno y Salas

México 2015

Impreso en México
Printed in Mexico

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La compilación y edición de esta Gaceta estuvieron a cargo
de la Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 17

Tomo I

Abril de 2015

Pleno y Salas

México 2015

DIRECTORIO

Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis:

Cielito Bolívar Galindo
Coordinadora

Erika Arellano Hobelsberger
Subdirectora General de Compilación
del Semanario Judicial de la Federación

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Presidente: Ministro Luis María Aguilar Morales

PRIMERA SALA

Presidente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministros José Ramón Cossío Díaz
Jorge Mario Pardo Rebolledo
Olga Sánchez Cordero de García Villegas
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

SEGUNDA SALA

Presidente: Ministro Alberto Pérez Dayán

Ministros José Fernando Franco González Salas
Margarita Beatriz Luna Ramos
Eduardo Medina Mora Icaza
Juan N. Silva Meza

CONTENIDO
GENERAL

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.... VII
Contenido..... XV
Advertencia..... XVII
Épocas..... XXIII

Consejo de la Judicatura Federal
Directorio de Plenos de Circuito (Tomo II)..... XI
Directorio de Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito (Tomo II)..... XXXIII
Cambios y Nuevas Adscripciones (Tomo II) LXXXI

PRIMERA PARTE
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Sección Primera
Jurisprudencia

Subsección 2.
Por contradicción de tesis..... 5

Subsección 5.
Ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que contienen criterios vinculatorios, en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las tesis respectivas 99

Sección Segunda
Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

Subsección 1.
Tesis aisladas y, en su caso, ejecutorias 159

Subsección 2.
Ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad que no contienen criterios vinculatorios, en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las tesis respectivas 163

SEGUNDA PARTE
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Sección Primera
Jurisprudencia

Subsección 1.
Por reiteración 227

Subsección 2.
Por contradicción de tesis 425

Sección Segunda
Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

Subsección 1.
Tesis aisladas y, en su caso, ejecutorias 485

Subsección 2.
Ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad y, en su caso, las tesis respectivas 519

TERCERA PARTE
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Sección Primera
Jurisprudencia

Subsección 1.
Por reiteración 597

Subsección 2.
Por contradicción de tesis 643

Subsección 4.
Sentencias que abandonan jurisprudencia 829

Sección Segunda
Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia

Subsección 1.
Tesis aisladas y, en su caso, ejecutorias 833

Subsección 2.
Ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad y, en su caso, las tesis respectivas 845

CUARTA PARTE
Plenos de Circuito

Sección Primera
Jurisprudencia

Subsección 2.
Por contradicción de tesis 897

QUINTA PARTE
Tribunales Colegiados de Circuito

Sección Primera
Jurisprudencia

Subsección 1.
Por reiteración 1351

Sección Segunda
Ejecutorias y tesis que no integran jurisprudencia 1655

SEXTA PARTE
Normativa y Acuerdos Relevantes

Sección Primera
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Subsección 1.
Pleno..... 1875

Sección Segunda
Consejo de la Judicatura Federal 1883

SÉPTIMA PARTE
Índices

Índice General Alfabético de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas 1929

Índice de Ejecutorias 1975

Índice de Votos Particulares y Minoritarios 1987

Índice de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales 1993

Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1997

Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes del Consejo de la Judicatura Federal 1999

OCTAVA PARTE
Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya publicación no es obligatoria y los votos respectivos

NOVENA PARTE
Sentencias relevantes dictadas por otros tribunales, previo acuerdo del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

DÉCIMA PARTE
Otros índices

CONTENIDO

Mediante el Acuerdo General Número 9/2011, de veintinueve de agosto de dos mil once, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, iniciaría con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, derivada de las sentencias dictadas a partir del cuatro de octubre de dos mil once, de los votos relacionados con éstas, de las tesis respectivas y de las diversas ejecutorias emitidas a partir de esa fecha, que expresamente acuerden los referidos órganos jurisdiccionales.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de abril de 2013, que entró en vigor el día tres siguiente, se expidió la Ley de Amparo, en cuyo artículo 220 se prevé que en el *Semanario Judicial de la Federación* se publicarán las tesis que se reciban y se distribuirá en forma eficiente para facilitar su conocimiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el 18 de abril de 2013, acordó que el *Semanario Judicial de la Federación* se publicara permanentemente de manera electrónica, en reemplazo del *Sistema de Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS*. En consecuencia, por Acuerdo General Plenario Número 19/2013 se estableció al *Semanario* como un sistema digital de compilación y difusión de las tesis jurisprudenciales y aisladas emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación; de las ejecutorias correspondientes, así como de los instrumentos normativos emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación.

La *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación* constituirá la versión impresa y electrónica de lo difundido en el *Semanario Judicial de la Federación*, y se publicará con una periodicidad mensual, iniciándose su circulación durante la segunda quincena del mes siguiente al que corresponda.

La *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación* en su versión en papel se integra por siete partes, con diversas secciones y subsecciones, que contienen, por regla general, la parte considerativa de las ejecutorias que integren jurisprudencia por reiteración y las tesis respectivas; las que resuelvan una contradicción de criterios, las que interrumpan jurisprudencia; y las que la sustituyan; el texto íntegro de las sentencias dictadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como las tesis respectivas; los votos correspondientes; la normativa, los diversos acuerdos y demás documentos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, y cualquier otra ejecutoria o tesis relevante, que aun sin integrar jurisprudencia, su publicación se ordene por el Pleno o alguna de las Salas de este Alto Tribunal, por un Pleno de Circuito o por un Tribunal Colegiado de Circuito.

Cada tesis y ejecutoria publicada en la *Gaceta* contiene una nota en la que se indican la fecha y hora de incorporación en el *Semanario*, así como las de su conocimiento público –cuando se cuente con ese dato–, con lo que se da certeza del momento en que se hace obligatoria, en su caso, la aplicación de aquéllas.

ADVERTENCIA

En la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación* se incluyen los índices general alfabético de tesis jurisprudenciales y aisladas, de ejecutorias, de votos particulares y minoritarios, de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, y de acuerdos; ello sin menoscabo de que en la *Gaceta Electrónica* también se publiquen, dentro de su Décima Parte, denominada "Otros índices", los índices por materia, de jurisprudencia por contradicción y de ordenamientos, ordenados alfabéticamente, así como una tabla general temática. En la versión electrónica se contienen dentro de su Octava y Novena Partes, las sentencias dictadas por tribunales del Estado Mexicano en las que ejerzan el control de constitucionalidad o de convencionalidad, en términos de lo previsto en los artículos 1o., párrafo tercero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas cuya difusión se estime relevante por el Pleno o por alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, se incluye el directorio de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Magistrados integrantes de los Plenos de Circuito y de los Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito.

Las tesis que se detallan en los mencionados índices y tablas llevan una clave que indica el órgano del que proceden, la materia, en su caso, y el número asignado por la instancia que las establece.

Las tesis correspondientes a la Décima Época se distinguirán de las aprobadas durante la Novena Época del *Semanario*, con la adición al número de identificación de la referencia: "(10a.)". Respecto de las tesis aprobadas en los años estadísticos posteriores, la numeración progresiva continuará relacionándose por el año en que son emitidas, con la referencia a la Época a la que pertenecen.

En el número de identificación de la jurisprudencia por reiteración que verse sobre temas de mera legalidad con precedentes emitidos durante la Novena y la Décima Épocas del *Semanario*, se deberá indicar que corresponde a esta última.

I. PLENO Y SALAS

a. TESIS JURISPRUDENCIALES

El número de identificación de las tesis de jurisprudencia del Pleno o de las Salas se integrará con la letra de la instancia, seguida de la letra J y después de un punto, dividiéndolas una diagonal, los números arábigos que corresponden al asignado a la tesis, las cifras relativas del año en que fueron aprobadas, divididas éstas por una diagonal, y la mención de que pertenecen a la Décima Época de publicación del *Semanario*.

Ejemplos:

P./J. 1/2011 (10a.) *1a./J. 1/2011 (10a.)* *2a./J. 1/2011 (10a.)*

b. TESIS AISLADAS

Las tesis aisladas se identificarán con la letra de la instancia, los números romanos que corresponden al asignado a la tesis, el año en que fueron aprobadas, y la mención de que pertenecen a la Décima Época.

Ejemplos:

P. I/2011 (10a.) *1a. I/2011 (10a.)* *2a. I/2011 (10a.)*

II. PLENOS DE CIRCUITO

a. TESIS JURISPRUDENCIALES

El número de identificación de las tesis jurisprudenciales de los Plenos de Circuito iniciará con las letras PC, luego un punto, se continúa con un número romano que indica el Circuito, se sigue con un punto y, en su caso, con la letra inicial de la materia de especialización del Pleno, con un punto, luego se señala la letra J, que significa jurisprudencia, una diagonal y el número arábigo de la tesis correspondiente, la materia a la que corresponde la tesis y, finalmente, la identificación de que se trata de una tesis de la Décima Época.

Ejemplos:

PC.III.P. J/1 KO (10a.)
Tesis jurisprudencial en materia común, número uno del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito

PC.XXXIII.CRT. J/10 A (10a.)
Tesis jurisprudencial en materia administrativa, número diez del Pleno en Materia Administrativa

Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones

b. TESIS AISLADAS

El número de identificación en las tesis aisladas de los Plenos de Circuito, se integrará por:

- Las letras PC, que significan Pleno de Circuito;
- El Circuito expresado con número romano, seguido de un punto. En el caso del Pleno en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se identificará con el número romano XXXIII;
- La sigla o siglas que expresen la materia del Pleno de Circuito, en caso de que éste sea especializado, seguidas de un punto cada una de ellas;
- El número secuencial que corresponda a la tesis en cuestión, señalado en cardinal, utilizando uno, dos o tres dígitos, según sea el caso, sin colocar ceros a la izquierda;
- La sigla o siglas que expresen la materia a la que corresponde la tesis, según sea constitucional (CS), común (K), penal (P), administrativa (A), civil (C) o laboral (L), y
- La referencia de que se trata de una tesis de la Décima Época.

Ejemplo:

PC.I.C.1 K (10a.)
Pleno de Circuito en Materia Civil del Primer Circuito (tesis común).

III. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Las tesis jurisprudenciales y aisladas derivadas de las sentencias dictadas por el Pleno y por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así

como por los Tribunales Colegiados de Circuito antes de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, corresponderán a la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación*, y se distinguirán agregando a su número de identificación: "(9a.)".

Las tesis derivadas de las sentencias dictadas por los referidos órganos jurisdiccionales con posterioridad a la entrada en vigor del referido Decreto corresponden a la Décima Época, y a su número de identificación se le agregará: "(10a.)". El mismo dato se agregará a las tesis aprobadas por los Plenos de Circuito.

a. TESIS JURISPRUDENCIALES

El número de identificación de las tesis de jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, se inicia con un número romano que indica el Circuito, seguido de un punto, continúa con un número ordinal que identifica al Tribunal de dicho Circuito –cuando sea Tribunal Colegiado único, no se hará señalamiento alguno–; después, la letra inicial de la materia del Tribunal Colegiado de Circuito con un punto –sólo se aplica a Tribunales Colegiados especializados por materia–; luego se señala la letra J, que significa jurisprudencia, una diagonal y el número arábigo de la tesis correspondiente, para finalizar con la referencia a la Décima Época.

Ejemplo:

III.2o.P. J/1 (10a.)
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

Cuando el órgano emisor sea un Tribunal Colegiado de un Centro Auxiliar de alguna Región, en lugar del número romano que identifique el Circuito respectivo, se agregará un paréntesis en el cual se indique el número romano de la Región a la que pertenece y la palabra Región.

Ejemplo:

(II Región)4o. J/1 (10a.)
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región.

b. TESIS AISLADAS

El número de identificación de las tesis aisladas de los Tribunales Colegiados de Circuito, se integrará por:

- El Circuito se expresa con número romano seguido de un punto;
- El número del Tribunal Colegiado de Circuito se expresa en ordinal, seguido también de un punto;
- En caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito sea especializado en una o en dos materias, la sigla o siglas que expresen la materia, respectivamente, seguidas de un punto cada una de ellas;
- El número secuencial que corresponda a la tesis en cuestión, señalado en cardinal, utilizando uno, dos o tres dígitos, según sea el caso, sin colocar ceros a la izquierda;
- La sigla o las siglas que exprese la materia a la que corresponde la tesis, según sea constitucional (CS), común (K), penal (P), administrativa (A), civil (C) o laboral (L), y
- La referencia de que se trata de una tesis de la Décima Época.

Ejemplo:

I.1o.C.1 K (10a.)
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (tesis común).

Cuando el órgano emisor sea un Tribunal Colegiado de un Centro Auxiliar de alguna Región, en lugar del número romano que identifique el Circuito respectivo, se agregará un paréntesis en el cual se indique el número romano de la Región a la que pertenece y la palabra Región.

Ejemplo:

(VIII Región)1o. 1 A (10a.)
Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región (tesis administrativa).

ÉPOCAS

Benito Juárez, como presidente de la República, el 8 de diciembre de 1870 promulgó el decreto por medio del cual el Congreso de la Unión creó un periódico con el nombre de *Semanario Judicial de la Federación*, en el que se publicaron todas las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales Federales desde el restablecimiento del orden legal en 1867; los pedimentos del procurador General de la Nación, del Ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia y de los Promotores Fiscales de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como las actas de acuerdo del Pleno de la Suprema Corte y los informes pronunciados ante ella, cuando se acordó la publicación.

Los movimientos políticos y sociales ocurridos en nuestro país y las reformas constitucionales influyeron en la publicación del *Semanario*, lo que originó sus Épocas.

Se ha dividido a las Épocas del *Semanario Judicial de la Federación* en dos grandes periodos constitucionales: antes y después de 1917. Dicha división obedece a que las tesis de jurisprudencia que fueron publicadas en las Épocas Primera a Cuarta (antes de 1917), hoy son inaplicables, no tienen vigencia, y por ello se agrupan dentro de lo que se ha llamado "jurisprudencia histórica". Las Épocas Quinta a Décima (de 1917 a la fecha) comprenden lo que se considera el catálogo de la "jurisprudencia aplicable". Al respecto es de destacar que en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley actual.

Con el propósito de que los funcionarios de los órganos jurisdiccionales, litigantes, estudiosos del derecho y público en general conozcan la integración de los tomos o volúmenes de las diversas Épocas del *Semanario* y los periodos que abarcan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, elaboró el presente cuadro:

PRIMER PERIODO
(JURISPRUDENCIA HISTÓRICA)

PRIMERA ÉPOCA	Comprende 7 tomos que contienen las resoluciones sostenidas por los Tribunales Federales de 1871 a septiembre de 1875.
SEGUNDA ÉPOCA	Comprende 17 tomos. Inicia en enero de 1881 con la reaparición del *Semanario* y termina en diciembre de 1889, por la crisis que se presentó cuando los fallos de la Corte se incrementaron debido al crecimiento poblacional de México, a su desarrollo económico y al exceso de amparos contra resoluciones judiciales de carácter civil y criminal.
TERCERA ÉPOCA	Comprende 12 tomos que contienen los fallos del Poder Judicial de la Federación de enero de 1890 a diciembre de 1897.
CUARTA ÉPOCA	Se integra por 52 tomos. Principia el 5 de enero de 1898 y finaliza en 1914.

SEGUNDO PERIODO
(JURISPRUDENCIA APLICABLE)

QUINTA ÉPOCA	Se integra por 132 tomos y cubre el periodo del 1o. de junio de 1917 al 30 de junio de 1957. Su ordenación se presenta en forma cronológica, además de que al final de cada tomo aparece publicado su índice.

SEXTA ÉPOCA	A partir de la publicación de las ejecutorias de julio de 1957, se introdujeron reformas sustanciales que motivaron la iniciación de la Sexta Época, la cual está integrada por 138 volúmenes numerados con cifras romanas y cubre el periodo del 1o. de julio de 1957 al 15 de diciembre de 1968. Los volúmenes se componen de cinco partes editadas en cuadernos por separado (Pleno y Salas Numerarias).
SÉPTIMA ÉPOCA	Las reformas y adiciones a la Constitución Federal y a la Ley de Amparo, efectuadas en 1968, y que dieron competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para integrar jurisprudencia, así como para conocer de amparos directos, marcaron la terminación de la Sexta Época y el inicio de la Séptima, la cual se integra por 228 volúmenes identificados con cifras arábigas y abarcó del 1o. de enero de 1969 hasta el 14 de enero de 1988. Por lo general, los volúmenes están compuestos por siete partes y editados en cuadernos separados, correspondientes a Pleno, Salas (penal, administrativa, civil y laboral), Tribunales Colegiados y Sala Auxiliar.
OCTAVA ÉPOCA	La Octava Época principió el 15 de enero de 1988 y culminó el 3 de febrero de 1995. Está integrada por 15 tomos identificados con números romanos (hasta el Tomo VI la publicación fue semestral y a partir del Tomo VII se transformó en mensual) y por 87 *Gacetas* de publicación mensual, las cuales contenían las tesis jurisprudenciales emitidas por el Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados de Circuito.
NOVENA ÉPOCA	Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el *Diario Oficial de la Federación* el 31 de diciembre de 1994, marcaron la terminación de la Octava Época y el inicio de la Novena el 4 de febrero de 1995. Esta Época culminó el 3 de octubre de 2011.

	En una sola obra se conjuntaron las publicaciones del *Semanario Judicial de la Federación y de su Gaceta*, cuya periodicidad es mensual.
DÉCIMA ÉPOCA	La entrada en vigor del Decreto publicado el 6 de junio de 2011 en el *Diario Oficial de la Federación*, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Decreto publicado en dicho medio oficial de difusión el 10 de junio de 2011, por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y se reformaron diversos artículos de la Ley Fundamental, en materia de derechos humanos, dieron lugar a la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, la cual inició con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, derivada de las sentencias dictadas a partir del 4 de octubre de 2011, de los votos relacionados con éstas, de las tesis respectivas y de las diversas ejecutorias emitidas a partir de esa fecha, que expresamente acuerden los referidos órganos jurisdiccionales.

PRIMERA PARTE

PLENO
DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECCIÓN PRIMERA
JURISPRUDENCIA

Subsección 2.
POR CONTRADICCIÓN DE TESIS

ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta información sea determinable para las partes, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto.

P./J. 7/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 357/2014. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 12 de marzo de 2015. Mayoría de siete

votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis 1a./J. 62/2014 (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 10 de octubre de 2014 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 262.

Tesis 2a./J. 151/2013 (10a.), de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 573, y

Tesis 2a./J. 62/2014 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: 'ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.'. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 1089.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número 7/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. De la interpretación sistemática de la expo-

sición de motivos del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, así como de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de los artículos 64 y 112 a 115 de la ley aludida, se aprecia la ampliación de la protección de los derechos fundamentales del gobernado. De este modo, en razón de esa salvaguarda ampliada, es que debe existir un procedimiento adecuado regido por el párrafo segundo del artículo 64 citado; de ahí que si en la resolución de un recurso de queja interpuesto en contra del desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito advierte de oficio la actualización de una diversa causal de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, dará vista a la parte recurrente para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga. Lo que resulta necesario, además, en virtud de que, al conocer del referido recurso y concluir que el respectivo juicio de amparo es improcedente por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, emite una resolución definitiva e inimpugnable, a diferencia de las determinaciones que sobre ese aspecto dicta el órgano jurisdiccional que en primera instancia conoce de la demanda de amparo indirecto.

P./J. 4/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 410/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 22 de enero de 2015. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, en contra de la consideración relativa a que la notificación respectiva se realice por lista y no en forma personal, Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de las consideraciones, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, con precisiones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 137/2013, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver la queja 45/2013.

Nota: De la sentencia que recayó a la queja 45/2013, resuelta por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, derivó la tesis aislada VI.1o.A.23 K (10a.), la que sirvió como precedente para integrar la jurisprudencia VI.1o.A. J/14 (10a.), de rubro, título y subtítulo: "QUEJA CONTRA EL AUTO DESECHATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. EN EL RECURSO RELATIVO ES INAPLICABLE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "QUEJA CONTRA EL AUTO DESECHATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO. EN EL RECURSO RELATIVO

ES INAPLICABLE LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", que aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, página 1708, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 12 de diciembre de 2014 a las 9:35 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 792, respectivamente.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número 4/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad.

P./J. 5/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 325/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de enero de 2015. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo

Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, en contra de la consideración relativa a que la notificación respectiva se realice por lista y no en forma personal, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis I.3o.C.39 K (10a.), de título y subtítulo: "CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA (RECURSO DE REVISIÓN O QUEJA). LA VISTA AL QUEJOSO QUE REGULA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, SE SATISFACE CUANDO EL PROYECTO QUE PROPONE UNA NUEVA QUEDA EN LA SECRETARÍA DE ACUERDOS A DISPOSICIÓN DE AQUÉL.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1614, y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 394/2013, 395/2013 y 396/2013.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número 5/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 360/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 21 DE ABRIL DE 2014. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de abril de dos mil catorce.

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio recibido el veintitrés de agosto de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por dicho órgano y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al fallar los juicios de amparo directo administrativo 315/2012 y 647/2012, respectivamente. El oficio de denuncia, en lo conducente, dice:

"Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el Pleno de este tribunal, a través de la sesión celebrada el seis de junio de dos mil trece, acordó denunciar la posible contradicción de criterios entre el sustentado por este órgano, al resolver el amparo directo 315/2012, promovido por **********, en contra de la sentencia dictada el seis de agosto de dos mil doce, por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad **********, contra el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 647/2012, en sesión de seis de diciembre de dos mil doce, lo que se corrobora del acta de sesión de la propia fecha, con cuya copia certificada se da cuenta.

"Asimismo, y como consecuencia a lo anterior, el Pleno de este tribunal ordenó girar instrucciones correspondientes a la Secretaría de Acuerdos, a fin de denunciar la posible contradicción de tesis al Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de resolver lo conducente.

"En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la posible contradicción de tesis al Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, a ese fin, remítanse copia certificada de la demanda de amparo, del acta de sesión de fecha seis de junio de dos mil trece y del testimonio de la ejecutoria del amparo directo en mención, así como el CD que la contenga para que, de ser procedente, se decida el criterio que debe prevalecer."

SEGUNDO.—Por auto del veintitrés de agosto de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 360/2013, requirió a los Tribunales Colegiados involucrados la remisión de la copia certificada de las respectivas sentencias ejecutorias y el turno del asunto a la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denun-

cia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO.—**Legitimación de quien promueve.** La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

TERCERO.—**Criterios materia de la contradicción de tesis.** Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes:

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el seis de junio de dos mil trece, el amparo directo 315/2012 sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente (fojas 18 a 66 del expediente):

"QUINTO.—Estudio de los conceptos de violación en suplencia de la queja y solución del problema jurídico. Los conceptos de violación expuestos por el representante legal de la persona jurídica quejosa, son esencialmente fundados, aun cuando para calificarlos así es necesario que este tribunal ejerza la facultad de suplencia de la queja deficiente, en términos de lo previsto en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

"Para arribar a esta conclusión, debe atenderse, en principio, a las particularidades del caso concreto.

"Por escrito presentado el once de mayo de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes Común de la Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, en su carácter de representante legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución **********, de veintinueve de marzo de dos mil seis, determinante del crédito fiscal **********, cuyo pago, refiere, se pretende hacer efectivo por la Administración Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

"En la demanda de nulidad, manifestó desconocer tanto el origen como el fundamento de dicho crédito fiscal y alegó el mandamiento de ejecución respecto de dicho crédito, notificado, según su dicho, el diez de febrero de dos mil doce.

"La Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de nulidad, por auto de dieciocho de mayo de dos mil doce, desechó la demanda por extemporánea, pues por la cuantía del asunto, el caso se situaba en los supuestos de procedencia del juicio en la vía sumaria, y porque el requerimiento con base en el cual se tuvo conocimiento de la existencia del crédito fiscal fue practicado el trece de febrero de dos mil doce; diligencia que no fue combatida en dicha demanda.

"Inconforme con esa determinación, el representante legal de la actora promovió recurso de reclamación y en el único agravio expuso, esencialmente, que del artículo 16, fracción II, en comento, se desprende que cuando el actor desconoce la resolución que desea impugnar así lo expresará en su demanda y, a su vez, deberá señalar la autoridad a quien le atribuye, ya sea su notificación o ejecución, siendo éstos los únicos requisitos que establece para que sea procedente el juicio; y que, en la especie, la empresa cumplió con esos requisitos, ya que la resolución impugnada fue desconocida tanto en su origen como en su fundamento, al no ser notificada conforme a derecho.

"El seis de agosto de dos mil doce, la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la resolución del recurso de reclamación interpuesto por el demandante, en la cual, confirmó el desechamiento de la demanda de nulidad.

"Consideró, esencialmente, que era evidente que el auto de dieciocho de mayo de dos mil doce resulta apegado a derecho, pues la actora acompañó el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago a través del cual se pretendió exigir el cobro correspondiente al crédito **********, y esas diligencias se llevaron a cabo el trece de febrero de dos mil doce, y que desde ese momento se tuvo conocimiento de la existencia de un crédito fiscal, aunque no de su contenido; por lo cual, era a partir de esa fecha cuando el plazo de quince días previsto en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comenzó a computarse para que se impugnara no sólo el desconocimiento del crédito, sino las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo de ejecución, sin que la actora hiciera algún pronunciamiento sobre la ilegalidad de la notificación del mandamiento de ejecución y del requerimiento de pago instaurados por la autoridad a la luz del crédito **********.

"Además de que los argumentos relativos al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo eran infundados, pues si bien cuando la actora manifiesta desconocer un acto o resolución se admite la demanda para que se dé a conocer el acto en la contestación, en el caso ésta supo sobre su existencia, a partir de que se hizo de su conocimiento el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago que pretende impugnar, por lo cual, en la especie, no bastaba manifestar ese desconocimiento del crédito, sino que dicha manifestación debió hacerse en el plazo que se tiene para impugnar el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago.

"En los conceptos de violación, la parte quejosa expone, por una parte, que la Sala pretende desarticular las palabras 'no conoce' del contexto de la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y que el criterio sostenido es subjetivo, en el sentido de que las actuaciones de autoridad ajenas al acto desconocido en el juicio puedan ser determinantes para constatar que éste no se promovió en los plazos que prevé la ley, pues el conocimiento de la existencia del acto mediante mandamiento de ejecución y requerimiento de pago no equivale al conocimiento de aquél, ni mucho menos esos documentos amparan la práctica de una diligencia de notificación relativa a la resolución desconocida.

"Añade que en términos del artículo 16, fracción II, antes referido, que contiene un procedimiento especial, en la demanda debe expresarse que se desconoce el origen y fundamento del acto impugnado y la autoridad a que se imputa su notificación o la ejecución; pero ello sólo como requisito de procedencia, el que, además, sí se cumplió en el caso; y añade que la Sala alude al plazo en que se tuvo conocimiento de la existencia del acto impugnado, sin embargo, en el mencionado artículo 16, fracción II, no se señala el momento en que se debe acudir a impugnar la resolución que no conoce, y mucho menos se establece un plazo que, al fenecer y no impugnarse el acto que no se conoce, tenga como resultado la extemporaneidad de la demanda.

"Considera que la sola manifestación de desconocimiento genera la admisibilidad de la demanda para que sea contestada, acompañándose las constancias relativas a la resolución y a su notificación, que podrán impugnarse; además de que del hecho de que la responsable pretenda instruirle de la forma en que debió promover la demanda, considerando que debió impugnarse lo relativo al procedimiento administrativo de ejecución, se puede advertir que el asunto fue confuso para la Sala, pues relaciona las documentales exhibidas para contabilizar el plazo previsto en el artículo 58-2 de la ley de la materia, a partir de la notificación acontecida de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, lo que resulta ilógico, pues esa notificación no

corresponde a la resolución combatida en el juicio, basándose, así, en simples presunciones que no pueden ser acreditadas, hasta en tanto se conteste la demanda y se acompañen las constancias correspondientes.

"Finalmente, aduce que el solo conocimiento de la existencia del crédito fiscal no puede llevar a validar el desechamiento, al atender que la ley contempla un procedimiento especial en el que se concede al gobernado la oportunidad de que conozca el acto desconocido y su notificación para combatirlo mediante ampliación de demanda.

"Como se advierte de lo anterior, la parte quejosa propone una interpretación distinta al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para su aplicación al caso concreto, de la efectuada por la Sala responsable, pues mientras ésta sostiene que si bien ese precepto establece que cuando se manifiesta desconocer un acto o resolución, se admite la demanda para que se dé a conocer el acto en la contestación, debe atenderse el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda en la vía sumaria (previsto en el artículo 58-2 de la referida legislación), desde el momento en que se supo sobre la existencia de aquel acto, aunque se desconozca su contenido, y que, en todo caso, debe impugnarse el mandamiento de ejecución con base en el que, precisamente, se conoció sobre la existencia de aquel acto, aquélla considera que la norma contiene un procedimiento especial relativo a que en la demanda debe expresarse que se desconoce el origen y fundamento del acto impugnado y la autoridad a que se imputa su notificación o ejecución, pero ello sólo como requisito de procedencia, siendo suficiente para su admisión, sin que se señale el momento en que se debe acudir a impugnar la resolución que no conoce ni plazo que, al fenecer, tenga como resultado la extemporaneidad de la demanda.

"En esta situación particular, se considera que es necesario llevar a cabo el ejercicio de suplencia de la queja de los conceptos de violación deficientes, pues si bien la interpretación normativa ahí efectuada se estima correcta, esto resulta en la medida de que se advierte la necesidad de acudir al principio constitucional de interpretación conocido como *pro personae*, a fin de determinar la mayor protección al derecho humano a la tutela judicial efectiva, a favor de la persona jurídica quejosa, en un caso donde la interpretación restrictiva sustentada por la autoridad responsable incide negativamente en el mencionado derecho de tutela judicial, dado que con base en una interpretación limitada se confirmó en el acto reclamado el desechamiento de la demanda de nulidad promovida por la actora.

"Ahora bien, atento a que en el caso concreto la parte quejosa es una persona jurídica, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, que acude

al juicio de amparo directo por medio de su representante legal, es necesario determinar, en primer lugar, si existe la tutela de derechos humanos a favor de personas jurídicas y, de ser así, en qué casos.

"El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del diez de junio de dos mil once, dice textualmente: 'Artículo 1o.' (se transcribe)

"De conformidad con el artículo transcrito, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia Constitución lo autoriza.

"Asimismo, esa disposición constitucional prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en tanto que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Finalmente, dispone la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas.

"De lo reseñado destaca que en el artículo 1o. constitucional, en su primer párrafo, el Poder Reformador de la Constitución estableció que todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"La cuestión a resolver es, entonces, si la expresión 'todas las personas' empleada en el Texto Constitucional comprende a las personas jurídicas, como lo es la quejosa y, por ende, gozan estas últimas de la protección de derechos humanos.

"Para dirimir dicha cuestión es útil remitirse a los antecedentes legislativos que dieron lugar a la reforma del artículo primero constitucional; así, se advierte que en los trabajos legislativos que se localizan en el apartado III de Consideraciones del dictamen, de ocho de marzo del dos mil doce, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, de la Cámara de Senadores, relativa a la reforma en materia de derechos humanos, textualmente, se señaló lo siguiente: 'Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término «persona» propuesto desde la Cámara de Origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas'; modificación que fue aceptada en sus términos, sin que hubiera sido motivo de discusión particular.

"Según deriva de las consideraciones del dictamen antes transcritas, el propósito del Constituyente en su calidad de Poder Reformador de 'persona' está referido a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad y que eso debe ampliarse a las personas jurídicas 'en los casos en que ello sea aplicable', lo que significa el reconocimiento de que las personas jurídicas al igual que las físicas son titulares de iguales derechos y deberes constitucionales, aun cuando con la importante precisión de que tratándose de personas ideales la tutela de derechos humanos a su favor sólo procederá en casos determinados.

"La ampliación de la protección a derechos humanos de las personas jurídicas autorizada por el Poder Reformador de la Constitución Federal es acorde con la tutela que respecto de tales personas jurídicas se ha reconocido en el derecho constitucional comparado, como se desprende de los documentos fundamentales que, a título de ejemplo, se mencionan a continuación: derecho constitucional comparado al que se acude, por su calidad de doctrina jurídica universal de los derechos humanos, lo que permite su invocación objetiva y racional para elucidar el tema de la protección a personas jurídicas en materia de derechos humanos.

"La Ley Fundamental para la República Federal Alemana, de mil novecientos cuarenta y nueve, establece que la dignidad del hombre es sagrada y constituye deber de todas las autoridades del Estado su respeto y protección; el pueblo alemán reconoce, en consecuencia, los derechos inviolables e inalienables del hombre como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo, y los derechos fundamentales enunciados vinculan al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y a los tribunales, a título de dere-

cho directamente aplicable. En el artículo 19.3 dispone expresamente que los derechos fundamentales rigen también a las personas jurídicas con sede en el país, 'en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas'.

"La Constitución de la República Portuguesa de veinticinco de abril de mil novecientos setenta y seis, establece que Portugal es una república soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular, y empeñada en la Constitución de una sociedad libre, justa y solidaria, concretamente en el artículo 12 señala que todos los ciudadanos gozan de los derechos y están sujetos a los deberes que se consignan en la Constitución y que las personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes 'que sean compatibles con su naturaleza'.

"Como se observa de lo expuesto, los documentos políticos fundamentales de la República Federal Alemana y de la República Portuguesa, establecen de modo expreso la tutela de derechos humanos a favor de las personas jurídicas; en el primer caso, los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas con sede en el país en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas y, en el segundo caso, se reconoce que las personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes compatibles con su naturaleza.

"Por otra parte, resulta de la mayor relevancia para la definición del punto jurídico a examen, atender a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el tema de la protección de derechos reconocidos en la referida convención, a favor de personas jurídicas o ideales, puesto que dicha Corte, en términos del artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es la competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de ese propio instrumento, siempre que los Estados partes hayan reconocido o reconozcan dicha competencia.

"El Tribunal en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada LXVI/2011, consideró que los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio, son orientadores para todas las decisiones de los Jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional; de modo que todos los Jueces mexicanos tienen el deber de observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, al interpretarlos y acudir a los criterios inter-

pretativos de la Corte Interamericana, para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger.

"En este contexto, es conveniente remitirse a las consideraciones que dicha Corte sostuvo en la sentencia de siete de septiembre de dos mil uno, en el caso 'Cantos vs Argentina', al atender las excepciones preliminares opuestas por el Estado demandado.

"En esa sentencia, la Corte analizó la excepción preliminar propuesta por el Estado Argentino, en la que opuso el argumento de que conforme al texto del artículo 1, inciso 2, de la Convención Americana, la misma no es aplicable a las personas jurídicas, al afirmar el artículo sujeto a interpretación que: 'Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano', de donde el demandado dedujo que las empresas del actor que poseen distintas formas societarias, no están amparadas por el mencionado artículo convencional.

"En apartados posteriores a la sentencia, al analizar la excepción preliminar, la corte precisó que resultaba útil, por un momento, aceptar la interpretación sugerida por el Estado demandado y examinar las consecuencias que ello tendría; y señaló que, según ese criterio, una sociedad civil o comercial que sufriera una violación de sus derechos reconocidos por la Constitución de su país, como la inviolabilidad de la correspondencia, no podría invocar el artículo 25 de la convención por ser precisamente una persona jurídica, y ejemplificó que, según esa interpretación, si un hacendado adquiere una máquina cosechadora para trabajar su campo y el gobierno se la confisca, tendrá el amparo del artículo 21, pero si en lugar de ello se trata de dos agricultores de escasos recursos que forman una sociedad para comprar la misma cosechadora, y el gobierno se la confisca, ellos no podrán invocar la Convención Americana, porque la cosechadora en cuestión sería propiedad de una sociedad; y que si los agricultores, en vez de constituir una sociedad la cosechadora en copropiedad, la convención podría ampararlos, porque según un principio que se remonta al derecho romano, la copropiedad no constituye nunca una persona ideal.

"Luego, refirió que toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, que la postula como permitida, prohibida u obligatoria; y cuando una norma jurídica atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan, por lo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para

regular sus conductas para con otros individuos y para limitar su responsabilidad, lo cual ejemplificó refiriéndose a las sociedades colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, etcétera.

"Expuso que, en el caso concreto, Argentina afirmó que las personas jurídicas no están incluidas en la Convención Americana y, por lo tanto, a dichas personas no se les aplica sus disposiciones, pues carecen de derechos humanos; sin embargo, la Corte Internacional hizo notar que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación.

"Enseguida, la Corte hizo recordar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y que tal como lo había hecho en varias ocasiones, afirmó que la interpretación pretendida por el demandado conducía a resultados irrazonables, pues implicaba quitar la protección de la convención a un conjunto importante de derechos humanos.

"La Corte consideró que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la convención Americana, como sí lo hace el protocolo No. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, eso no restringía la posibilidad de que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del derecho. En este apartado, la Corte señaló que valía hacer una distinción para efectos de admitir cuáles situaciones podrían ser analizadas bajo el marco de la Convención Americana.

"Continuó sosteniendo que, en el caso sub júdice, todos los recursos administrativos y judiciales, salvo una denuncia penal y un amparo interpuesto en mil novecientos setenta y dos, al inicio de los hechos denunciados, fueron presentados directamente por 'derecho propio y en nombre de sus empresas' por el señor Cantos, por lo que la supuesta violación de los derechos de la Convención del señor Cantos podría ser analizada en la etapa de fondo correspondiente; además, la Corte precisó que la parte demandada no explicó cuál era el razonamiento lógico que utilizó para derivar del texto del artículo 1.2 de la convención la conclusión a que llegó, cuando la jurisprudencia internacional ha reiterado que quien pretende basarse en un razonamiento lógico, debe demostrar los pasos de esa operación, y concluyó que, una vez demostrado que la interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana se fundaba

en un razonamiento inválido, debía rechazarse la excepción de incompetencia interpuesta.

"De lo anterior destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuó, en su calidad de máximo intérprete de la Convención Americana, la interpretación que debe darse al artículo 1, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer que toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, y cuando una norma atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria; de modo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular su conducta frente a otros y limitar su responsabilidad, en consecuencia, sentó la premisa de que los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en los derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre y representación; asumir una interpretación contraria a la establecida en esa premisa llevaría a resultados irrazonables y a dejar sin protección un importante conjunto de derechos humanos. Por lo tanto, concluyó que si bien no ha sido reconocida la figura de las personas jurídicas de manera expresa por la Convención Americana, a diferencia de su reconocimiento en la Convención Europea, eso no debía restringir la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, el individuo pudiera acudir al sistema interamericano para hacer valer derechos humanos, aun cubiertos por una ficción o figura jurídica creada por el mismo sistema del derecho.

"En suma, el artículo 1o. constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; la expresión 'todas las personas' empleada en el Texto Fundamental comprende no sólo a las personas físicas consideradas en su calidad de seres humanos, sino a las personas jurídicas, aunque en este supuesto únicamente en los casos en que las consideraciones del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Senadores, de ocho de marzo de dos mil doce; dicha interpretación es uniforme con lo definido en el derecho constitucional comparado, al que resulta válido acudir por su calidad de doctrina universal de los derechos humanos, como la Ley Fundamental para la República Federal Alemana, que en su artículo 19.3 dispone que los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas con sede en el país, en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas, o como la Constitución de la República Portuguesa, que en su artículo 12 señala que las personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes que sean compatibles con su naturaleza; incluso, es relevante destacar que la protección de derechos

humanos a personas jurídicas ha sido tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia al caso 'Cantos Vs. Argentina', por lo que es necesario atender a las consideraciones que emitió en su calidad de intérprete supremo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por constituir un criterio orientador para la jurisdicción nacional, según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en la mencionada sentencia, la Corte Interamericana sostuvo que toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana y cuando la norma atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria; de modo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular su conducta y limitar su responsabilidad, por consecuencia, sentó la premisa de que los derechos y atribuciones de las personas morales se resuelven en los derechos y obligaciones de las personas físicas; de suerte que si bien no ha sido reconocida de manera expresa la figura de las partes jurídicas por la Convención Americana, como sí lo hace el protocolo número 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, ello no debía restringir la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, el individuo puede acudir al sistema internacional de derechos humanos, para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el propio sistema del derecho. En conclusión, debe admitirse que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable, con arreglo a la naturaleza de esas personas, al constituir figuras y ficciones jurídicas creadas por el propio sistema del derecho, cuyos derechos y obligaciones se resuelven en los de las personas físicas.

"Una vez establecido que, en principio, las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos humanos y de su consecuente protección, corresponde determinar en qué supuestos es posible reconocer dicha protección a las personas jurídicas. Para resolver esta segunda cuestión, este Tribunal Colegiado considera necesario que se atiende al contenido del derecho humano vulnerado, para el propósito de definir si el derecho humano comprometido es consustancial a las personas físicas en su calidad de seres humanos, o bien, si existen razones objetivas que justifiquen su protección sólo en favor de ellas, pero no así de las personas jurídicas, pues en el supuesto de inexistencia de esas razones justificativas la protección deberá extenderse a las personas ideales.

"En el caso, este tribunal considera que, en la especie, se compromete de manera predominante el derecho humano a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Mexicana y 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que de la inter-

pretación que se haga del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dependerá la admisión de la demanda de nulidad planteada o su desechamiento, según que esa interpretación sea extensiva o restrictiva; y de atenderse a la primera de tales interpretaciones con apoyo en la directriz constitucional que manda preferir la interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas –incluidas desde luego las jurídicas cuando ello sea aplicable– la protección más amplia, el resultado será la eficiente protección del derecho humano a la tutela judicial efectiva, respecto del cual este órgano jurisdiccional no advierte razones objetivas que justifiquen un trato judicial diferente en la tutela de dicho derecho entre las personas físicas y las jurídicas.

"A fin de demostrar que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe recibir un tratamiento constitucional sustancialmente distinto, según que el agraviado sea una persona física o una jurídica, es necesario remitirse al contenido del mencionado derecho, en concordancia con lo que sobre el particular ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"El Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 35/2005-PL, estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho gradual y sucesivo, que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz; de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los derechos de audiencia y de debido proceso.

"La Segunda Sala, por su parte, al fallar la contradicción de tesis 401/2012, consideró que la tutela efectiva es un derecho complejo y comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, así como el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución; a la par que ese concepto se encuentra íntimamente ligado con la prohibición de la indefensión, por lo que se relaciona directamente con el concepto de formalidades esenciales del procedimiento que tutela, a su vez, el artículo 14 de la Constitución Federal.

"Conforme a lo reseñado, el tratamiento constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser distinto cuando el titular del derecho humano lo es una persona física que cuando lo es una persona jurídica, si se toma en cuenta que por su contenido es el mismo para ambas clases de personas y que no existen razones objetivas que justifiquen un trato desigual

entre los sujetos mencionados, puesto que siguiendo el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, dicho derecho a la tutela es gradual y sucesivo, se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que deben ser superadas hasta lograr su plena eficacia, en tanto que sobre el mismo derecho humano la Segunda Sala considera que es un derecho complejo que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, así como los derechos al debido proceso, a que se dicte una decisión ajustada a la ley, a recurrir la decisión y a obtener su ejecución; de donde se concluye que la tutela judicial efectiva descansa en el principio de igualdad de todas las personas, tanto físicas como jurídicas, a tener el libre acceso a la jurisdicción del Estado.

"Dilucidados los temas relacionados con la protección de la tutela judicial efectiva a favor de personas jurídicas, así como el contenido jurisprudencial de tal derecho humano, y previo aun al estudio de la cuestión de fondo, es menester decidir si conforme a las premisas reconocidas, es válido suplir la deficiencia de queja en el supuesto en que se ventila la violación del derecho humano específico de tutela judicial en perjuicio de una persona ideal.

"En principio, debe destacarse que este tribunal consideró que la facultad de suplir la deficiencia de la queja se actualiza cuando en el juicio de garantías se advierte la transgresión a un derecho humano específico en perjuicio del quejoso. Bajo esa premisa, aprobó la tesis aislada IV.2o.A. 6 K, de rubro: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.' (se transcribe)

"Esta tesis aislada derivó de la sentencia dictada en el amparo directo **********, promovido por **********, y el criterio asumido fue reiterado en el diverso **********, promovido por **********. En ambos juicios los sujetos que acudieron al amparo directo fueron personas físicas instando por su propio derecho. Las consideraciones con base en las cuales se sustentó la tesis de referencia, en lo conducente, son las siguientes:

"Sustancialmente se expuso que los artículos 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo establecen que la suplencia de los conceptos de violación y la de los agravios opera cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, la cual alude a las materias civil, mercantil y administrativa, ya que específicamente se utiliza la expresión 'en otras materias'; se refi-

rió que por virtud de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que dicha Constitución establece; que el segundo párrafo de dicho precepto legal establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; que ello se traducía en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio *pro personae*, lo que hacía evidente que dicha disposición constitucional se originó precisamente para salvaguardar los derechos humanos de los gobernados, lo que se corroboraba con el contenido del párrafo tercero de dicho numeral, que prescribe de manera categórica la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los citados derechos; se concluyó que cuando en el juicio de amparo se advirtiera la violación de un derecho humano específico en perjuicio de la parte quejosa, procedía la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, dada la importancia y trascendencia que reviste para el ordenamiento jurídico la tutela de esos derechos, pues lo que está de por medio es su restauración o restitución.

"Como se aprecia de lo expuesto, las consideraciones con base en las cuales este Tribunal Colegiado determinó la procedencia de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando se advierta la violación de un derecho humano específico en perjuicio de personas físicas, son igualmente válidas, tratándose de personas jurídicas, pues además de subsistir idénticas razones de importancia y trascendencia de la restauración o restitución del ordenamiento constitucional vulnerado, debe añadirse que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable con arreglo a la naturaleza de esas personas, al constituir figuras y ficciones jurídicas creadas por el propio sistema del derecho, dado que las obligaciones y derechos de las personas ideales se resuelven en los de las físicas.

"Supuestos en los que el derecho humano específico que se encuentra comprometido en la controversia, por su propio contenido, deben recibir el mismo tratamiento constitucional, como sucede en la especie con el derecho a la tutela judicial efectiva, donde no se advierte la existencia de razones jus-

tificativas objetivas que diferencien ese tratamiento constitucional, según se trate de personas físicas o jurídicas.

"Una vez establecido que la protección a derechos humanos debe comprender a los derechos de las personas jurídicas, en los casos en que ello sea aplicable, como sucede en el presente asunto donde el derecho humano vulnerado es el de tutela judicial efectiva; que el tratamiento constitucional de ese derecho no debe ser distinto para personas físicas o jurídicas; y que al estar comprometido en la controversia el mencionado de derecho de tutela judicial, es necesario ejercer la facultad de suplir la deficiencia de la queja; sólo resta determinar, con base en el principio hermenéutico conocido como *pro personae*, de rango constitucional, cuál es la interpretación más favorable que razonablemente cabe efectuar de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que sirvió de fundamento en el recurso de reclamación del que deriva el acto reclamado, para confirmar el desechamiento de la demanda de nulidad promovida por la persona jurídica quejosa.

"En primer lugar, debe recordarse que la Sala responsable precisó que el auto por el que se desechó la demanda de nulidad por extemporánea, resultaba apegado a derecho, pues la actora acompañó el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago, a través del cual se pretendió exigir el cobro correspondiente al crédito **********, y esas diligencias se llevaron a cabo el trece de febrero de dos mil doce, por lo que consideró que desde ese momento se tuvo conocimiento de la existencia de un crédito fiscal, aunque no de su contenido, por lo cual era a partir de esa fecha cuando el plazo de quince días previsto en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo comenzó a computarse para que se impugnara el crédito desconocido y las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo de ejecución, sin que se hiciera algún pronunciamiento sobre la ilegalidad de la notificación del mandamiento de ejecución y del requerimiento de pago instaurados relativos; todo lo cual sustentó en su interpretación restrictiva del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido que, si bien, cuando la actora manifiesta desconocer un acto o resolución en la demanda, debe admitirse la demanda para que se dé a conocer al actor la resolución impugnada en la contestación, en el caso, la actora supo sobre su existencia a partir de que se puso en su conocimiento el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago que pretende impugnar, por lo cual, no bastaba manifestar el desconocimiento del crédito, pues esa manifestación debió hacerse en el plazo que se tiene para impugnar el mandamiento de ejecución y el requerimiento de pago.

"Frente a esa interpretación, la parte quejosa sostiene que el aludido artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contiene un procedimiento especial relativo a que en la demanda de nulidad debe expresarse que se desconocen el origen y el fundamento del acto impugnado y señalar la autoridad a la que se imputa la resolución, su notificación o su ejecución, sólo como requisito de procedencia, siendo suficiente para la admisión de la demanda, sin que se señale el momento en que debe acudirse a impugnar la resolución que no se conoce ni plazo que, al fenecer, tenga como resultado la extemporaneidad de la instancia.

"Este tribunal considera que la interpretación legal propuesta por la persona jurídica quejosa es fundada, aun cuando para estimarlo de esa manera debe suplirse la deficiencia de la queja, pues en el contexto normativo constitucional sustentado en la presente ejecutoria, resulta obligado acudir por imperativo constitucional a la interpretación extensiva del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de procurar la eficaz protección del derecho humano a la tutela judicial efectiva favoreciendo a la persona jurídica quejosa la protección más amplia en la solución de la litis debatida en la resolución de la que emana el acto reclamado.

"Conforme a esas premisas, conviene señalar que establecen los artículos 58-2 y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 'Artículo 58-2.' (se transcribe) 'Artículo 16.' (se transcribe)

"Del artículo 58-2 se advierte que, como regla general, en los casos en que proceda el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria la demanda deberá presentarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con las disposiciones del propio ordenamiento, ante la Sala Regional competente.

"Del diverso artículo 16, fracción II, se advierte que atiende al supuesto específico, relativo a que si el actor manifiesta desconocer la existencia de la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución; en tal caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismos que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.

"En la misma disposición se establece que, de considerarse que no hubo notificación o que ésta fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocer-

la o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado con base en dicha notificación, procediéndose al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución; y que si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida.

"Por consiguiente, debe destacarse que este numeral consigna una verdadera pauta de protección al derecho de tutela judicial efectiva, pues su finalidad es permitir la instauración del juicio contencioso administrativo en el supuesto específico en que se alegue el desconocimiento del acto que se pretende combatir, a fin de que se tenga pleno conocimiento del acto impugnado, se expongan los motivos de ilegalidad en su contra y se ofrezcan las pruebas conducentes a demostrar su ilicitud; por consiguiente, dicho precepto legal debe ser interpretado de la manera más extensiva posible para el propósito de lograr la mayor eficacia de la tutela judicial efectiva; puesto que, incluso, en relación con el artículo referido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 209/2007, consideró, en lo pertinente, que en esa disposición el legislador estableció un derecho al actor, consistente en que durante el procedimiento se respete la garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, evitando dejarlo sin defensa ante la imposibilidad de combatir actos de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, según se desprende de la parte conducente de la citada jurisprudencia.

"Por lo tanto, es factible considerar que una interpretación extensiva del numeral en comento, de conformidad con el contenido del derecho humano a la tutela judicial efectiva, establecido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica necesariamente la prosecución del proceso en todas sus etapas, permitiéndose al contribuyente el conocimiento del acto y su notificación; otorgándosele la oportunidad de ampliar la demanda, de exponer los argumentos que estime necesarios en contra de la resolución administrativa y su notificación y de ofrecer las pruebas que estime conducentes, para que, una vez agotadas todas las etapas del procedimiento, se dicte un fallo en el que se determine la legalidad o ilegalidad de tales actos; ello en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva consiste en un derecho gradual y sucesivo, que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz y lo que, a su vez, está interconectado con los derechos humanos de seguridad y certeza jurídicas, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

"Así, la interpretación de dicho precepto, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad y a la certeza jurídica, debe ser en el sentido de que prevé un supuesto específico para la promoción del juicio contencioso administrativo, en aquellos supuestos en los que se manifieste desconocer el acto que se pretende impugnar, donde debe administrarse la demanda, sin que su presentación, en ese momento, esté sujeta al plazo genérico de quince días contado a partir de la fecha manifestada como de conocimiento de la resolución administrativa que se pretende impugnar, pues así se garantiza el desarrollo total del procedimiento y una adecuada y oportuna defensa frente al acto de autoridad, que se aduce desconocer.

"En suma, la interpretación extensiva del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los preceptos 1o. y 17 constitucionales y 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, efectuada con apoyo en el principio hermenéutico *pro personae*, debe ser en el sentido de que dicho dispositivo legal establece a favor del actor en el juicio de nulidad un auténtico derecho a que se respete la audiencia, y los consecuentes principios de certidumbre y seguridad jurídica, según lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto, cuando el actor afirma desconocer la resolución administrativa impugnada y señala en la demanda la autoridad a la que imputa la resolución, su notificación o su ejecución, basta con esa afirmación para admitir a trámite la demanda, hipótesis en la que la autoridad deberá acompañar a su contestación la constancia de la resolución administrativa y de su notificación, a fin de que el actor la combata a través de la ampliación de la demanda; de manera que, satisfechos esos requisitos, ello es suficiente para continuar la prosecución del juicio de nulidad y para que, en su oportunidad, se decida sobre la presentación en tiempo de la demanda y sobre el plazo en que debieron ser impugnadas la resolución administrativa, su notificación o su ejecución, con lo cual se protege de manera eficiente el derecho a la audiencia, al permitir al particular el conocimiento íntegro del acto y su consiguiente impugnación, puesto que el Pleno de la Suprema Corte definió a la tutela judicial como un derecho gradual y sucesivo que va perfeccionándose mediante el cumplimiento de etapas correlativas que deben de ser superadas hasta el logro de su eficacia, mientras que la Segunda Sala consideró que la tutela judicial es un derecho complejo que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales; consecuentemente, la interpretación extensiva del citado artículo 16, fracción II, favorece la protección más amplia del derecho a la tutela judicial efectiva.

"Como corolario a lo anterior, debe decirse que la interpretación efectuada por la Sala responsable al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado su carácter restrictivo, no es la más favorable al derecho humano a la tutela judicial efectiva, pues semejante interpretación coarta los derechos al debido proceso, a que se dicte una decisión ajustada a la ley, a recurrir la decisión y el de obtener su ejecución, todo lo cual dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa, al desecharse la demanda en la que manifestó desconocer el acto impugnado.

"Debe precisarse que este tribunal reconoce que una demanda de nulidad no debe admitirse a trámite cuando se presenta fuera del plazo genérico de quince días establecido en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contando a partir de que surta efectos la notificación del acto impugnado; sin embargo, lo que sostiene en la presente ejecutoria es que la interpretación extensiva del artículo 16, fracción II, de ningún modo genera una incompatibilidad o contradicción entre tales supuestos normativos, ni permite el incumplimiento de ese plazo impugnativo, pues aun cuando se considera que en el particular debe admitirse la demanda para que la autoridad allegue en la contestación el acto impugnado y su notificación y, por consiguiente, la actora esté en aptitud legal de impugnarlas, lo cierto es que es el propio precepto sujeto a interpretación el que dispone expresamente que si se llegara a considerar que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá en el juicio, en relación con la resolución administrativa combatida.

"Por conclusión, si en el caso concreto la parte actora promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución ********** de veintinueve de marzo de dos mil seis, determinante del crédito fiscal **********, afirmando que su pago se pretende hacer efectivo por la Administración Local de Recaudación del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, notificado el diez de febrero de dos mil doce, y manifestó desconocer tanto el origen como el fundamento de dicho crédito fiscal, la Sala responsable, con base en la interpretación más benéfica del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sustentada en el principio hermenéutico *pro personae*, debió considerar que la presentación de la demanda no estaba sujeta al plazo genérico de quince días establecido en el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"No constituye obstáculo a la conclusión alcanzada, el argumento expuesto a mayor abundamiento por la Sala, en el sentido de que no puede hacerse caso omiso de la notificación realizada el trece de febrero de dos mil doce del mandamiento de ejecución y requerimiento de pago, porque según su criterio ello implicaría una clara tendencia a beneficiar a la actora y pasar por alto la presunción de legalidad de que gozan esas actuaciones; ello porque en el caso de que se demuestre que el crédito fiscal del que derivan esos actos no fue debidamente notificado o que fuera ilegal, el propio artículo 16, fracción II, establece que si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado con base en dicha notificación.

"Por las consideraciones que sustentan la presente ejecutoria, al quedar evidenciado que la interpretación normativa realizada por la Sala responsable no fue la más favorable al derecho humano a la tutela judicial efectiva, establecido en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita otra en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, declare fundados los agravios expuestos en el recurso de reclamación interpuesto en contra del desechamiento de la demanda de nulidad y ordene su admisión al Magistrado instructor, a fin de que éste continúe con su trámite por todas sus partes de ley hasta el dictado de la sentencia definitiva que en derecho corresponda.

"En atención a que este tribunal consideró que existen casos en los que debe reconocerse la tutela de derechos humanos a favor de personas jurídicas, lo que, al parecer, es contrario al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en la tesis aislada de rubro: 'DERECHOS HUMANOS. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE SU TITULARIDAD.', denúnciese la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por ambos órganos jurisdiccionales, para los efectos legales conducentes."

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el seis de diciembre de dos mil doce, el amparo directo 647/2012, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente (fojas 75 a 319 del expediente).

"QUINTO.—La quejosa, como conceptos de violación, expone: '… X-A. Conceptos de violación relativos a la competencia de la autoridad primigenia y que la Sala juzgadora no hizo valer de oficio.—Apartado especial para demostrar procedencia de los conceptos de violación relativos al estudio de la competencia que la Sala juzgadora no hizo valer de oficio. El presente apartado especial versa sobre la procedencia del estudio de los conceptos de violación, por parte de ese honorable tribunal ad quem, relativos a controvertir las violaciones cometidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al dejar de analizar –y pronunciarse en sentido contrario a derecho– la fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad primigenia.—Para dar mayor claridad a las consideraciones y conclusiones expuestas el presente apartado especial se divide en las siguientes secciones: A) Competencia y su fundamentación: Requisito esencial de los actos de autoridad. B) Estudio oficioso de la competencia. C) Pronunciamientos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad. D) Criterios contradictorios: Acciones del Tribunal Colegiado ante conceptos de violación que aducen la falta de análisis de la incompetencia de la autoridad. E) Derechos humanos y sus garantías: Compromisos y obligaciones del Estado Mexicano. F) La controversia: El criterio acorde a los derechos humanos y sus garantías. G) Conclusión: Razones por las que deberá prevalecer la procedencia de conceptos de violación relativos a la falta de análisis de la competencia de la autoridad por parte del Tribunal Fiscal.—A) Competencia y su fundamentación: Requisito esencial de los actos de autoridad.—A saber del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de molestia deberá ser emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.—Esta garantía de fundamentación, consagrada en el arábigo 16 citado, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad para emitir determinado acto, ya que sólo de esta manera podrá demostrar que su actuación se encuentra dentro de los límites competenciales correspondientes. En ese sentido, si en un acto de molestia no se citan con exactitud y precisión los fundamentos que facultan a la autoridad para afectar al gobernado, ese acto carecerá de validez y eficacia.—Bajo esa tesitura, la competencia es un presupuesto procesal que atañe la correcta integración de un procedimiento, siendo cuestión de orden público, máxime en tratándose de un procedimiento que concluye con una carga fiscal a los particulares, siendo su fundamentación un requisito esencial del acto de autoridad.—Efectivamente, la fundamentación de los actos de autoridad es una consecuencia directa de la garantía de legalidad, mecanismo protector de mi derecho a la seguridad jurídica, consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite en forma expresa,

por lo que en dichos actos la exactora deberá citar los preceptos normativos que la legitimen para actuar en determinado sentido, señalando el párrafo, apartado, fracción, inciso o subinciso, máxime en tratándose de una excepción al derecho a la inviolabilidad del domicilio.—Sustentan mi dicho las siguientes jurisprudencias:

"'Registro No. 205463. Localización: Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, 77, mayo de 1994, página 12, tesis P./J. 10/94, jurisprudencia, materia común. «COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.» (se transcribe)

"'Registro No. 188432. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XIV, noviembre de 2001, página 31, tesis 2a./J. 57/2001, jurisprudencia, materia administrativa. «COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.» (se transcribe)

"'Registro No. 177347. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXII, septiembre de 2005, página 310, tesis 2a./J. 115/2005, jurisprudencia, materia administrativa. «COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.» (se transcribe)

"'«COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL CUYO ESTUDIO ES DE ORDEN PÚBLICO LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN ANALIZARLA DE OFICIO, SIN DISTINGUIR SI SE TRATA DE LA INDEBIDA, INSUFICIENTE O DE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE AQUÉLLA.» (se transcribe)

"'(Se citan precedentes). «INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS

LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.» (se transcribe)

"'«COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.» (se transcribe)

"'De lo expuesto se concluye que la competencia de las autoridades, al ser un presupuesto procesal que atañe la correcta integración de un procedimiento y al ser cuestión de orden público, es de estudio oficioso, por lo que ese honorable tribunal deberá analizarla ineludiblemente, sin distinguir entre su falta, indebida o insuficiente.—C) Pronunciamientos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad.—En la sección ha quedado demostrado que la competencia de la autoridad, como requisito esencial de los actos de autoridad que atañe a la correcta integración de un procedimiento y cuestión de orden público, deberá ser analizada oficiosamente por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.—Ahora se procede a definir cómo deberá pronunciarse ese honorable Tribunal Fiscal cuando analice la competencia de manera oficiosa.—En ese tenor y tal como lo refuerzan diversos criterios, entre los que resalto la tesis IV.1o.A.249 A con número de registro 170114, el tribunal puede pronunciarse en dos sentidos: 1) Que estime a la autoridad incompetente es incompetente, caso en el cual el pronunciamiento de la Sala será indispensable, porque ella constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada. 2) Que considere que la autoridad es competente. Al efecto, la Sala podrá: a. Hacer un pronunciamiento expreso en el sentido de que la autoridad es competente para emitir el acto impugnado. b. Omitir tal pronunciamiento.—Lo anterior no necesita mayores explicaciones, pues resulta patente que el honorable Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrá pronunciarse en dos sentidos cuando analice de oficio la competencia de la autoridad exactora, siendo éstos: • Que estime a la autoridad incompetente, caso en que se pronunciará. • Que estima a la autoridad competente, caso en que podrá hacer pronunciamiento tácito o expreso. Derivado de estas acciones pueden surgir algunos escenarios específicos, como lo es la presente litis, por lo que para llegar a nuestra verdad jurídica se entrará a un estudio profundo aplicado a nuestro caso concreto.—D) Criterios contradictorios: Acciones del Tribunal Colegiado ante conceptos de violación que aducen la falta de análisis de la incompetencia de la autoridad.—En la sección previa ha quedado claro que cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa analice la competencia oficiosamente y determine que la autoridad exactora es competente,

bastará el pronunciamiento expreso.—Sin embargo, nos interesa dilucidar que sucede cuando la Sala juzgadora del juicio contencioso deja de pronunciarse respecto a la competencia de la autoridad, aun en el caso de que la misma resulta manifiesta, notoria y evidente, e inclusive existen sentencias y jurisprudencias al respecto.—Para desentrañar lo anterior, se procede a analizar los diversos criterios que han existido en cuanto al tema.—En primer lugar, figura la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXIV en julio de 2006.—Dicho criterio nace de la contradicción de tesis 44/2006-SS, cuyo tópico principal es elucidar si conforme a lo dispuesto en el artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben, en todos los casos, analizar de oficio la competencia de la autoridad que emitió el acto impugnado, por ser una cuestión de orden público y constituir un presupuesto procesal de esencial pronunciamiento para determinar la legalidad de los actos impugnados, o si tal estudio sólo debe realizarse cuando la incompetencia de dicha autoridad sea evidente, sin necesidad de efectuar un análisis de los preceptos que sirven de fundamento.—Al respecto, la ejecutoria resuelve emitiendo la jurisprudencia en estudio, bajo el rubro: «COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.».—No obstante, pese a que el tema específico en análisis, la Segunda Sala se pronunció igualmente en el siguiente sentido: … también resulta conveniente precisar que la circunstancia de que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa omitan hacer pronunciamiento de oficio en cuanto a la competencia de la autoridad demandada, no deja en estado de indefensión al actor, puesto que al promover amparo directo puede plantear en forma expresa ese tema de incompetencia, aun cuando no lo hubiera propuesto en los conceptos de impugnación que formuló en la demanda de nulidad; lo anterior, porque el derogado artículo 238, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, obliga a las Salas a ocuparse de ese tema, aunque no haya planteamiento.—Consecuentemente, si en la demanda de garantías la parte quejosa plantea esa omisión y expone las razones por las cuales considera que la autoridad demandada carece de competencia para emitir el acto cuya invalidez se pretende, el Tribunal Colegiado que conozca del asunto debe ocuparse de tal cuestión y pronunciarse sobre la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, aun cuando la resolución reclamada no contenga ese pronunciamiento; en cambio, si no hay concepto de violación expreso, tal aspecto no puede ser analizado en el juicio de amparo, por tratarse de una materia que es de estricto derecho, o si solamente aduce que la Sala omitió dicho estudio, el argumento así planteado debe

declararse inoperante por incompleto.—Este criterio resultaba no sólo bastante lógico y plenamente apegado a derecho, sino que representaba un gran avance en nuestro estado jurídico, en la protección a los derechos humanos y sus garantías de seguridad jurídica y en la exigencia del cumplimiento de requisitos esenciales de los actos de molestia.—Sin embargo, definido lo anterior, la Segunda Sala hace un abrupto cambio, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXVI en diciembre de 2007.—En este nuevo criterio ... después de una nueva y profunda reflexión ... –y así lo dice– abandona el criterio que sostuvo en la jurisprudencia número 2a./J. 99/2006, que resolvió la contradicción de tesis 44/2006-SS, en el sentido de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe examinar en todos los casos la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada.—La consecuencia directa de abandonar el criterio imperante fue el planteamiento de que: ... en el supuesto de que el actor, en el juicio de nulidad, no haya expresado en su demanda agravio sobre la incompetencia de la autoridad y la Sala no haya efectuado pronunciamiento al respecto, y lo planteé aquí en el juicio constitucional, el Tribunal Colegiado que conozca del asunto deberá declarar inoperante este concepto de violación, debido a que en el amparo directo el particular podrá alegar la violación a la falta de análisis de la incompetencia de la autoridad emisora del acto combatido en el juicio contencioso administrativo, únicamente cuando lo hubiese planteado vía concepto de anulación en el juicio de nulidad ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque no puede obtener, a través del juicio de amparo directo, un beneficio que no alegó en aquel juicio contencioso, que no planteó en su oportunidad y cuyo estudio oficioso la Sala realizó, y estimó que la autoridad era competente.—Es así que la honorable Segunda Sala pasó de estimar que: ... si en la demanda de garantías la parte quejosa plantea esa omisión y expone las razones por las cuales considera que la autoridad demandada carece de competencia para emitir el acto, cuya invalidez se pretende, el Tribunal Colegiado que conozca del asunto debe ocuparse de tal cuestión y pronunciarse sobre la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, aun cuando la resolución reclamada no contenga ese pronunciamiento.—A sostener que: ... en el supuesto de que el actor en el juicio de nulidad, no haya expresado en su demanda agravio sobre la incompetencia de la autoridad y la Sala no haya efectuado pronunciamiento al respecto, y lo plantee aquí en el juicio constitucional, el Tribunal Colegiado que conozca del asunto, deberá declarar inoperante este concepto de violación.—Este cambio radical representa un verdadero obstáculo para la conformación de un sólido estado de derecho, no sólo porque resulta limitativo de los derechos humanos y sus garantías, sino porque es permisivo e incitador de la ausencia de requisitos esenciales en los actos de

autoridad.—Por ello, y al ser la incompetencia de la autoridad administrativa una cuestión de orden público que incide directamente en la eficacia y validez del acto de autoridad, el criterio que debe prevalecer y aplicárseme es el primero establecido.—Pensar distinto y soportar el criterio posterior sólo restringe la correcta aplicación de los derechos humanos y sus garantías, dejándose, además, sin mecanismos de defensa ante las decisiones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.—E) Derechos humanos y sus garantías: compromisos y obligaciones del Estado Mexicano.—Previamente, se sostuvo que la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXVI, en diciembre de 2007, es limitativa de los derechos humanos y sus garantías.—Para sustentar tal afirmación es imperante, *a primo* tempore, entrar al estudio de la normatividad que rige la materia de los derechos humanos en toda su extensión, por lo que se analizarán tanto las disposiciones nacionales, como las internacionales.—Ello, porque debe considerarse la reforma efectuada el 10 de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos.—Dicha modificación plasmó en el artículo 1o. de Nuestra Carta Magna: «Artículo 1o.» (se transcribe)

"'Es así que a partir de la reforma transcrita el Estado Mexicano reconoce la incorporación directa de los tratados internacionales a nuestro marco legislativo, comprometiéndose –y obligándose– además a: • Interpretar las normas relativas a derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. • Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. • Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.—De conformidad con lo anterior, el Estado Mexicano se inviste como un protector de los derechos humanos y sus garantías, obligándose y haciendo parte de su marco normativo a los tratados internacionales. Compromiso que encuentra refuerzo en los numerales 1, 2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.—En ese tenor, la aplicabilidad de los tratados internacionales resulta innegable, por lo que libremente se puede acudir a los derechos en ellos contenidos, como es el caso de las garantías judiciales.—Las garantías judiciales se encuentran evocadas en los numerales 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que textualmente dictan: Convención Americana sobre Derechos Humanos.—«8. Garantías judiciales.—1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus de-

rechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.».—Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.—«Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contencioso será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.».—Ambos numerales armonizan perfectamente con los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Política, máxime que entre las garantías a las que hacen referencia los tratados internacionales se encuentran también las establecidas en la legislación nacional.—En esa tesitura, sumadas a los derechos contenidos en los tratados internacionales, conviene traer a la luz, en primer lugar, las garantías otorgadas por el numeral 14 constitucional, que manifiesta: «Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.».—Del párrafo citado se desprenden las garantías de: • Audiencia.—• Defensa adecuada.—• Debido proceso.—• Legalidad.—En segundo término, se trae a colación el numeral 16 constitucional que expresa: 'Artículo 16.' (se transcribe).—Del contenido transcrito nacen las garantías de: • Autoridad competente.—• Fundamentación y motivación.—• Mandamiento escrito.—• Legalidad.—Estas garantías enlistadas fungen como mecanismo de protección a los derechos humanos que, en términos del artículo 1o. constitucional, nuestro Estado se comprometió a promover, respetar, proteger y garantizar.—Lo anterior cobra fuerza a la luz de las 33 iniciativas de reforma que dieron origen a la reforma del 10 de junio de 2011, particularmente, en las que definen: Los Estados del orbe, han conceptuado los términos de derechos humanos y garantías individuales en sus distintos ordenamientos jurídicos, como los mecanismos legales para proteger el recurso más importante de sus países, es decir, al ser humano.—«Cámara de Origen: Diputados; Exposición de motivos; 11. Iniciativa de diputado (Grupo parlamentario del Pan); México, D.F., a 6 de septiembre de 2007, Gaceta Parlamentaria No. 2335-1; Que reforma los artículos 1o., 9o. y 11 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado **********, del grupo parlamentario del PAN.—Ahora bien, el término garantías individuales debe de complementarse con el de derechos humanos, debido a que cuando se habla de garantías nos referimos a los mecanismos necesarios para poder prevenir la violación de tales derechos o repararla si es que tal violación ya ha acontecido.».—«Cámara de Origen: Diputados; Exposición de motivos; 26. Iniciativa de diputados (Diversos grupos parlamentarios del PAN); México, D.F., a 24 de abril de 2008, Gaceta Parlamentaria No. 2492-11; Que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, suscrita por diputados de los grupos parlamentarios del PRD, del PRI, del PT, de Convergencia, de Alternativa y de Nueva Alianza.—Como se muestra, las garantías quedan conceptualizadas como los mecanismos legales para prevenir o reparar la violación a los derechos humanos, siempre en aras de proteger al ser humano. Definición que concuerda con el compromiso del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.—En esa inteligencia, la seguridad jurídica se erige como un derecho intimado al conjunto de mecanismos para su protección –garantías de seguridad jurídica–; por lo que para respetar ese derecho a la certeza del gobernado sobre todo lo relativo al acto de autoridad, deberán forzosamente acatarse las garantías de audiencia, defensa adecuada, debido proceso, legalidad, autoridad competente, fundamentación y motivación y mandamiento escrito.—Con ello se protegerá a el recurso más importante de nuestro país, el ser humano, puesto que al existir una verdadera seguridad jurídica con sus respectivos mecanismos legales –garantías– para su protección se otorgará a los gobernados la certeza de que toda afectación que cometa la autoridad sobre su esfera jurídica será conforme a las leyes correspondientes, eliminando así toda posibilidad de incertidumbre y arbitrariedad, y conservando intactos sus derechos como individuo.—Es en este punto donde las garantías de seguridad jurídica convergen con las garantías judiciales de los tratados internacionales.—En efecto, puesto que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial ... para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden ... fiscal ... derecho que como se observa tiene expresa aplicación al procedimiento fiscal.—De conformidad con todo lo expuesto en la presente sección se concluye: 1) Que a partir del 10 de junio de 2011 el Estado Mexicano, vía legislación nacional y vía tratados internacionales se comprometió –y obligó– a: a. Interpretar las normas relativas a derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—b. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos.—c. Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.—Tal como consta en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.—2) Que tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial ... para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden ... fiscal. ... 3) Que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén algunas de las debidas garantías de audiencia, defensa adecuada, debido proceso, legalidad, autoridad competente, fundamentación y motivación y mandamiento escrito.—4) Que dichas garantías de seguridad jurídica fungen como un mecanismo legal para prevenir o reparar la violación al derecho mismo a la seguridad jurídica, siempre con el firme afán de proteger al recurso más importante ... el ser humano.».—F) La controversia: El criterio acorde a los derechos humanos y sus garantías.—Definida la sección E), relativa a los derechos humanos y sus garantías en la extensión de la legislación nacional y la internacional, se procede a contraponerla contra la sección D), referente a la evolución de los criterios alusivos a los conceptos de violación en los que se arguye la falta de análisis de la incompetencia de la autoridad por parte del honorable Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.—En ese tenor, se sostiene que como actor del juicio primigenio, al argüir conceptos de violación relativos a la insuficiente fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad, éstos han de prosperar, aun si no se adujeron en el juicio contencioso administrativo, por las razones que se desglosarán en la sección H).—Ello resulta tan claro y evidente, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación lo reconoció en su después abandonada jurisprudencia 2a./J. 99/2006, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXIV, en julio de 2006, en la que definió que: ... si en la demanda de garantías la parte quejosa plantea esa omisión y expone las razones por las cuales considera que la autoridad demandada carece de competencia para emitir el acto, cuya invalidez se pretende, el Tribunal Colegiado que conozca del asunto debe ocuparse de tal cuestión y pronunciarse sobre la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, aun cuando la resolución reclamada no contenga ese pronunciamiento.—Criterio que después abandonó para sentar la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXVI, en diciembre de 2007, y que establece que: ... en el supuesto de que el actor en el juicio de nulidad, no haya expresado en su demanda agravio sobre la incompetencia de la autoridad y la Sala no haya efectuado pronunciamiento al respecto, y lo plantee aquí en el juicio constitucional, el Tribunal

Colegiado que conozca del asunto, deberá declarar inoperante este concepto de violación.—Este abrupto cambio deriva en una limitación a los derechos humanos y sus garantías, que no sólo viola las garantías de defensa adecuada, debido proceso, autoridad competente, fundamentación y motivación y legalidad, sino que rompe con el compromiso adquirido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, y se aleja de una interpretación que actúe favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—G) Conclusión.—Razones por las que deberá prevalecer la procedencia de conceptos de violación relativos a la falta de análisis de la competencia de la autoridad por parte del Tribunal Fiscal. A la luz de todo lo expuesto, y del distanciamiento de la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, respecto a la protección de los derechos humanos, es que deberá prevalecer la interpretación que primeramente existió contenida en la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, pues no sólo es la mayor de mayor (sic) beneficio al gobernado, sino que es la que verdaderamente respeta los derechos humanos y sus garantías de manera extensiva.—Como refuerzo a lo anterior, enlisto las razones concretas por las que sostengo debe prevalecer el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 99/2006: 1) Es una cuestión de competencia.—2) Es una obligación autoimpuesta por el Estado Mexicano en su legislación interna.—3) Es un compromiso adquirido por el Estado Mexicano ante los tratados internacionales.—4) La aplicación del principio *pro homine* a razón de la legislación nacional e internacional.—5) Existe una reforma en materia de derechos humanos que apertura la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación* y que modifica el control de la convencionalidad y constitucionalidad.—6) Establece un medio de control de legalidad.—7) Los tribunales mismos reconocen la necesidad de ese medio de control.—8) Los seres humanos son susceptibles al error.—9) La insuficiencia de los requisitos del acto es notoria. 10) La soberanía reside en el pueblo.—A continuación procedo a explicar brevemente cada una de las razones enlistadas: 1) Es una cuestión de competencia.—En efecto, la controversia se suscita respecto a la posibilidad de controvertir la falta o el deficiente análisis de la competencia de la autoridad exactora por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.—En ese sentido, y como fue expuesto en la sección A), la fundamentación de la competencia es un requisito esencial de los actos de autoridad, al ser un presupuesto procesal que atañe la correcta integración de un procedimiento, siendo cuestión de orden público. Razones por las cuales, además, resulta de estudio oficioso, como se expresó en la sección B).—Partiendo de ello, es claro que debe existir la posibilidad de controvertir la falta o el insuficiente análisis de la competencia por el Tribunal Fiscal, puesto que, al ser un requisito esencial ha de ponérsele mayor atención y no permitirse, por ningún motivo, su

falta o insuficiencia.—2) Es una obligación autoimpuesta por el Estado Mexicano en su legislación interna.—Cierta y claramente el Estado Mexicano se comprometió y obligó a sí mismo a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.—En ese contexto, si es innegable que los artículos 14 y 16 constitucionales prevén los mecanismos legales para prevenir o reparar la violación a los derechos humanos, es evidente deberá implementarlos.—Es decir, si los numerales referidos contemplan las garantías de seguridad jurídica –de defensa adecuada, debido proceso, legalidad, fundamentación y motivación, mandamiento escrito y competencia– tendentes a proteger el derecho a la seguridad jurídica, es inexcusable que el Estado deberá respetarlas, pues dichas garantías fungen como mecanismos de protección del derecho mismo a la seguridad jurídica, y el Estado se comprometió, precisamente, a proteger y garantizar esos derechos.—3) Es un compromiso adquirido por el Estado Mexicano ante los tratados internacionales.—Efectivamente, en términos de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Mexicano se ha comprometido a respetar los derechos reconocidos, en tanto en su legislación nacional, como en los tratados internacionales.—Bajo esa tesitura, si tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial ... para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden ... fiscal. ... Es axiomático que el Estado Mexicano deberá respetar las debidas garantías, dentro de las que, precisamente, se encuentran las de fundamentación y motivación y autoridad competente, ello con el fin de realizar la protección más extensiva a los derechos humanos a través de sus garantías, máxime que así se obligó ante los organismos internacionales.—4) La aplicación del principio *pro homine* a razón de la legislación nacional e internacional.—El principio *pro homine* se halla recogido en los numerales 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.—Consiste en que siempre se ha de buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y a la norma más restringida cuando se trata de establecer límites al ejercicio de esos derechos.—Ello va en perfecta concordancia con el artículo 1o., segundo párrafo, de nuestra Constitución, que establece: «Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a

las personas la protección más amplia.».—Por consiguiente, al existir dos criterios contradictorios –uno de ellos indebidamente abandonado– ha de prevalecer el que posea la interpretación más extensiva, puesto que le favorece a los gobernados la protección más amplia.—Es por ello que, aunque la jurisprudencia de interpretación más extensiva se encuentre abandonada, esa honorable Suprema Corte deberá aplicarla e, inclusive, retomarla como criterio vigente y superior al que causa, en la especie, causa perjuicio y limita los derechos.—5) Existe una reforma en materia de derechos humanos que apertura la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación* y que modifica el control de la convencionalidad y constitucionalidad.—Tal como consta en el Acuerdo General Número 9/2011, de veintinueve de agosto de dos mil once, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, la Décima Época comenzó: ... con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, derivada de las sentencias dictadas a partir del cuatro de octubre de dos mil once ... Es decir, que las sentencias emitidas a partir del 4 de octubre de 2011, ya pertenecen a la Décima Época.—Esto es sumamente relevante y suficiente para dejar sin efectos la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, que posiblemente en su época fuera eficiente y aplicable, pero que en esta Décima Época, relativa a los derechos humanos, resulta completamente obsoleta.—Es por ello que las consideraciones en ella contenidas ya no resultan aplicables, por lo que ese honorable tribunal deberá ... abstenerse de considerarlas, para dilucidar conclusiones más acordes a la Época en que nos encontramos y que sí armonicen con los compromisos que el Estado Mexicano fijó en materia de derechos humanos.—Máxime a la luz de la modificación al control de la constitucionalidad y la convencionalidad que hizo la jurisprudencia: Tesis jurisprudencial 18/2012 (10a.). «CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).» (se transcribe)

"'6) Establece un medio de control de legalidad.—En este aspecto, la posibilidad de aducir conceptos de violación relativos a la falta o al insuficiente estudio oficioso de la competencia de la autoridad por parte del honorable Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, funge también como un medio de control de la legalidad y de oposición a las posibles arbitrariedades del Estado.—Evidentemente, dicha oportunidad se manifiesta como: • El derecho del gobernado para oponerse a los actos del Estado a través de un medio de defensa adecuado, con la finalidad de hacer valer sus derechos y garantías.—Es decir, como la posibilidad de defenderse adecuadamente ante la falta o el insuficiente estudio de la competencia por el tribunal fiscal.—

• Un medio de control de legalidad, a través del cual se velará que, tanto los actos de la autoridad exactora como los del Tribunal Fiscal, sean emitidos conforme a derecho.—Aceptar la permanencia de la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, sólo equivaldría a privar al gobernado de su derecho a defenderse adecuadamente y a oponerse ante los actos arbitrarios del Estado, permitiéndose, además, la existencia jurídica de tales actos que no cumplen con los requisitos esenciales de validez.—7) Los tribunales mismos reconocen la necesidad de ese medio de control.—El punto anterior se encuentra plenamente reconocido, precisamente, por un órgano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis VI.1o.A.249 A, con número de registro 168979, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXVIII, en septiembre de 2008, en la que: ... se concluye que si en la sentencia primigenia hubo un pronunciamiento tácito o expreso, en el sentido de que la autoridad demandada tiene competencia para emitir el acto impugnado, y este tópico no fue materia de la litis ante el Tribunal Colegiado, la Sala no está facultada a realizar un nuevo pronunciamiento relacionado con la competencia de la autoridad o su fundamentación, atento que ha quedado firme.—Como se advierte, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, señala que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no está facultado para realizar un nuevo segundo pronunciamiento relativo a la competencia cuando este tópico no fue materia de la litis ante el Tribunal Colegiado.—Dicha expresión, a contrario sensu y en armonía con el principio *pro homine*, afirma que si ese tópico si fuere materia de la litis ante el Tribunal Colegiado, la Sala del Tribunal Fiscal podrá realizar un nuevo pronunciamiento relacionado con la competencia de la autoridad.—Tal locución es perfectamente acorde a mis argumentos y es emitida pese a la existencia de una jurisprudencia definida en el sentido de que: ... en el supuesto de que el actor en el juicio de nulidad, no haya expresado en su demanda agravio sobre la incompetencia de la autoridad y la Sala no haya efectuado pronunciamiento al respecto, y lo planteé aquí en el juicio constitucional, el Tribunal Colegiado que conozca del asunto, deberá declarar inoperante este concepto de violación.—Así pues, reluce nuevamente la ilegalidad del criterio de la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, recién transcrito, en tanto el Tribunal Colegiado de mérito evidencia la necesidad de un mecanismo de control de legalidad que permita a los gobernados oponerse a los actos del Estado a través de un medio de defensa adecuado, en firme protección a los derechos humanos y sus garantías.—En virtud de lo anterior, es que debe prevalecer el criterio original y abandonado de la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, pues es reconocido por un órgano del Estado lo imperioso de que exista la posibilidad de aducir conceptos de violación relativos a la falta o al insuficiente análisis de la competencia y su fundamentación y motivación, ante los Tribunales Colegiados, aun cuando

no se hayan hecho valer en el juicio contencioso administrativo.—8) Los seres humanos son susceptibles al error.—El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada.—Johann Wolfgang Goethe.—Esta razón, aunque pareciera simplista, encierra una gran verdad: Todos los seres humanos cometemos errores.—Apreciado bajo ese enfoque, ha de recordarse que el recurso humano o personal del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está compuesto por personas, término que el *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española* define como: Individuos de la especie humana.—Ahora bien, es innegable que los seres humanos no somos perfectos y, que sí somos susceptibles a errores, aseveración que no requiere mayor explicación por ser un hecho más que evidente.—En ese entendido, los Magistrados del honorable Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al ser humanos, son susceptibles al error, por lo que aun en el ejercicio de sus funciones no se encuentran exentos de equivocarse.—En ese sentido, los Magistrados del honorable tribunal pueden equivocarse y dejar de analizar o valorar vicios en la competencia de la autoridad, inclusive, la ausencia de la fundamentación y motivación de la misma, y aun siendo éstos notorios.—Ante tal posibilidad de error se hace aún más necesaria la implementación de un mecanismo de control de legalidad que coadyuve a velar por el respeto a mi derecho a la seguridad jurídica.—En esa necesidad halla su lógica la posibilidad de aducir, vía conceptos de violación, la falta o el insuficiente estudio oficioso de la competencia de la autoridad primigenia por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.—Pensar de manera distinta, es decir, no otorgándose la oportunidad de controvertir la falta o el insuficiente estudio de la competencia por parte del tribunal fiscal, me dejaría en completo estado de indefensión e inseguridad jurídica.—Ello en tanto mis derechos humanos y sus garantías dependerían únicamente de un ser humano totalmente susceptible al error, que de equivocarse me perjudicaría gravemente –como sucede en la presente litis–, sin existir la posibilidad de interponer algún mecanismo de control que me protegiera ante tal desacierto.—En ese tenor, es absolutamente innegable que deberá prevalecer el criterio que proteja con mayor eficiencia mi derecho a la seguridad jurídica y sus garantías, máxime que el Estado Mexicano se comprometió –y obligó– a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y a interpretar la Constitución y los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—Coligiendo, finalmente, que esa protección más amplia a los derechos humanos se logra confiriendo la posibilidad a los gobernados de aducir en su demanda de amparo conceptos de violación relativos a la falta o al insuficiente estudio de oficio –y su respectivo pronunciamiento– de la competencia de la autoridad, es decir, de interponer un medio de control de la legalidad ante los posibles errores de los Magistrados juzgadores.—9) La insuficiencia

de los requisitos del acto es notoria.—Aunado a lo expuesto en la razón anterior, es de hacer notar que el principal vicio relativo a competencia de la autoridad primigenia resulta plenamente notorio, evidente y axiomático, por lo que la abstención del pronunciamiento favorable a mis intereses sólo puede atribuirse a un error del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.—En efecto, como se expondrá en el concepto de impugnación único relativo al presente apartado X-A. Conceptos de violación relativos a la competencia de la autoridad primigenia que la Sala juzgadora no hizo valer de oficio, el vicio es notorio, evidente, axiomático, dadas las siguientes consideraciones: • Existen diversas sentencias que resuelven en sentido favorable al contribuyente.—• Existe jurisprudencia firme que define el tema. No obstante, más adelante se profundizará en el tópico, por el momento, se expone una síntesis de la ilegalidad cometida por la autoridad primigenia y no analizada por el Tribunal Fiscal: • La autoridad exactora funda su competencia en el artículo 43, fracción II, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación.—• La fracción II referida se compone de dos párrafos: • El primero, que establece la facultad para designar a la persona o personas que efectuarán la visita.—• El segundo, que establece que las personas designadas podrán actuar conjunta o separadamente.—• La fiscalizadora fundó únicamente la competencia relativa al segundo párrafo, por lo que, evidentemente, excluyó la potestad contenida en el párrafo primero.—Armonizando con lo anterior, el honorable Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por cuanto hace a la insuficiente fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad, aun en el caso de que como actor no la hubiere controvertido en el juicio contencioso, a razón de que el estudio de la competencia –como ya se ha expuesto– resulta oficioso para esa autoridad juzgadora.—Ahora bien, como se manifestó previamente, la ilegalidad cometida por la autoridad primigenia es patente, clara y axiomática, por lo que ese honorable Tribunal Fiscal debió haberla invocado en el juicio como resultado de su estudio oficioso, máxime que se constituye como un hecho notorio.—Al respecto, apoyan mi dicho los siguientes criterios: • Hecho notorio, se constituye con lo resuelto por el órgano juzgador en diverso juicio y la ejecutoria que le dé firmeza. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, primera sección, publicación No. 26, febrero de 2003, página 155. «HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.». Tesis VI.1o.P. J/25, registro 187526, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XV, marzo de 2002. «HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS

SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.». Tesis XX.2o. J/24, registro 168124, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXIX, enero de 2009.—Justo como lo corroboran los criterios anteriores, las resoluciones emitidas por los órganos juzgadores constituyen hechos notorios, más aún porque son datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales de los órganos de gobierno.—En ese contexto, las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales de los órganos de gobierno, como se puede constatar en los siguientes enlaces: • Suprema Corte de Justicia de la Nación: *www.scjn.gob.mx*.—• Jurisprudencias y tesis (IUS) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: *http://200.38.163.178/paginas/tesis.aspx*.—Ello deja en claro que las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen hechos notorios para ese honorable tribunal especializado en materia fiscal, por lo que es indubitable que ese órgano juzgador debió aplicar el siguiente criterio: • Existe la jurisprudencia 2a./J. 85/2007, con número de registro 172,457, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXV, en mayo de 2007, que confirma la ilegalidad en que se incurre al citar únicamente el párrafo segundo en comento.—No obstante a las consideraciones jurídicas expuestas, ese honorable Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa hace caso omiso al criterio referido, dejando así de pronunciar un fallo acorde a mi derecho a la seguridad jurídica y a sus garantías.—Bajo esa tesitura, y por esta otra razón, se concluye que deberá prevalecer la abandonada jurisprudencia 2a./J. 99/2006, pues es ésta la que me concede un mecanismo de control de legalidad a través del cual puedo controvertir el error cometido por la Sala Fiscal, por cuanto dejó analizar suficientemente la competencia de la autoridad, aun pese a existir jurisprudencia firme –hecho notorio– favorable a mis intereses.—En ese tenor, es absolutamente innegable que deberá prevalecer el criterio que proteja con mayor eficiencia mi derecho a la seguridad jurídica y sus garantías, máxime que el Estado Mexicano se comprometió –y obligó– a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y a interpretar la Constitución y los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.—Sumado a lo anterior, no debe perderse de vista que las violaciones cometidas por la primigenia en materia de competencia, no solamente eran notorias, sino que, además, las conocía, pues le fueron informadas mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Golfo.—10) La Soberanía reside en el Pueblo.—El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: «Artículo 39.» (se transcribe).—Como se colige, la soberanía

de nuestro país reside en el pueblo.—Para dar mayor amplitud a lo anterior, nos remitimos al *Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española* define a la soberanía como: Cualidad de Soberano y define el término Soberano como: «Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente.».—En ese sentido, es claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que la autoridad suprema e independiente radica en el pueblo.—Correlacionando esta expresión con todos los compromisos adquiridos por el Estado en el arábigo 1o. de nuestra Carta Magna, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se tiene, entonces, que el Estado Mexicano hará todo lo posible por proteger a sus gobernados, pues en ellos radica el poder máximo.—Siguiendo esa lógica, es evidente que, al provenir el poder supremo del pueblo, las normas jurídicas han de interpretarse y aplicarse en beneficio del mismo, pues es él quien se constituye como verdadero regente de nuestro país.—Bajo esa tesitura, es axiomático que si nuestro Estado Mexicano se comprometió a que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en función a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, haciéndolo en el entendido de proteger y salvaguardar a sus gobernados, en quienes radica el poder máximo.—Así también, como gobernado representante de la supremacía del Estado, me encuentro con todo el derecho de solicitar, e inclusive exigir, a ese honorable tribunal que realice la interpretación más favorable a mis intereses, siendo aquella que me otorgue la protección más amplia y promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos; pues es evidente que dichas regulaciones emanadas del poder absoluto del pueblo, buscan precisamente proteger y beneficiar al mismo.—Máxime que, tal como lo dice el artículo 39 constitucional: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.—Por lo que el poder ejercido por ese honorable tribunal se encuentra supeditado a los gobernados, pues en ellos y para ellos nace, y más allá de ello, se instituye para beneficio de los mismos.—En ese contexto, al ser ese honorable tribunal un órgano condicionado a la voluntad del pueblo mexicano, cuyo poder dimana y se instituye para beneficio del mismo, deberá aplicar las interpretaciones jurídicas que precisamente el gobernado solicite y que vayan en beneficio de éste, favoreciéndole la protección más amplia.—Es así que debe aplicarse a nuestra litis el abandonado criterio de jurisprudencia 2a./J. 99/2006, pues éste es el que como gobernado autoridad suprema solicito, además de que es el que genera un mayor beneficio y proporciona la protección más amplia a mis derechos humanos.—A la luz de todas las razones expuestas es dable concluir la procedencia de mis conceptos de violación relativos a controvertir la falta o el insuficiente análisis por parte de la Sala a quo de la competencia de la autoridad primigenia, por lo que se solicita a ese honorable tribunal

prevalezca la interpretación contenida en el criterio de jurisprudencia 2a./J. 99/2006 a mi caso particular, y se ordene a la honorable Primera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictar resolución declarando la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio contencioso, en virtud de las ilegalidades cometidas respecto a competencia y su fundamentación y motivación.'

"...

"SEXTO.—Son inoperantes en una parte e infundados en otra los conceptos de violación que se analizan.

"La impetrante del amparo manifiesta, medularmente, en su primer apartado, previo a los conceptos de violación, que la competencia de la autoridad demandada es una cuestión de orden público y que la Sala responsable debe estudiarla conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin embargo, la referida juzgadora omitió analizar la competencia material y, con ello, vulneró en su perjuicio las garantías individuales tuteladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con diversas tesis vinculadas con la competencia de las autoridades administrativas, que invoca en tal motivo de inconformidad.

"Lo anterior alegado deviene infundado.

"Si bien de conformidad con el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán analizar la competencia de la autoridad cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado, o la Sala resolutora advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del acto impugnado es incompetente; lo cierto es que cuando el demandante formule en sus agravios o conceptos de impugnación alegaciones tendentes a controvertir la competencia de la autoridad demandada, la citada juzgadora examinará el problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación, declarará la nulidad del acto combatido.

"No obstante, cuando la Sala del conocimiento realiza un estudio oficioso de la competencia de la autoridad demandada, porque a ello la obliga el referido artículo 51, si estima que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido es indispensable, porque ello cons-

tituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; empero, si considera que la autoridad es competente no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que dicha juzgadora apreció que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio contencioso administrativo; tan así es que continuó con el análisis de procedencia del juicio y entró al examen de fondo de la cuestión planteada.

"Por consiguiente, en el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado sólo estará obligado al análisis del concepto de violación expresado respecto de la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de omisión de su estudio, cuando este argumento haya sido planteado como agravio o concepto de anulación en el juicio contencioso administrativo, o bien, haya sido motivo de examen oficioso por parte de la Sala, pues de lo contrario el estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que la parte quejosa no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de una inconformidad que no formó parte de la litis en el juicio, bien porque no la hizo valer o porque la autoridad responsable, al estimar que la demanda era competente, no formuló consideración expresa sobre el particular.

"Se considera aplicable al caso, la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 218/2007, pronunciada por la propia Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 148/2007-SS, visible en la página ciento cuarenta y cuatro, Tomo XXVI, correspondiente a diciembre de dos mil siete, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, del tenor siguiente:

"'COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.' (se transcribe)

"Por otro lado, en su escrito de demanda de amparo, el peticionario de garantías, en la totalidad de sus conceptos de violación y en apartados especiales, insiste en que la sentencia reclamada, vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales, 1, 2, 3, 14 y 17 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 8, y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que la Sala responsable no se funda en derecho, ni hace una interpretación exegética, ni respeta el obligado principio *pro homine* dejando con ello de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, de impartir justicia de manera imparcial, de favorecer la protección más amplia y de promover y garantizar los derechos humanos.

"Destaca que la responsable se encuentra obligada a proteger y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en relación con los diversos 16 del propio ordenamiento, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8 de las garantías judiciales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en vinculación con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, por los motivos que refiere.

"Lo antes expuesto resulta inoperante.

"En efecto, son de desestimarse los argumentos precedentes, dado que el principio *pro personae* o *pro homine*, no cobra aplicación en la hipótesis de las personas morales.

"Lo anterior, ya que toda persona física es titular de derechos humanos, pues el reconocimiento de éste es una consecuencia de la afirmación de la dignidad humana, sin embargo, tal acontecimiento no se actualiza respecto de una persona moral (**********), pues representa un ente ficticio notoriamente carente del factor relativo a la dignidad humana, siendo este último el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos, valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

"Para arribar a lo anterior, se debe partir de un análisis muy básico tratando de contextualizar las dos unidades semánticas que componen la expresión 'derechos humanos'. La palabra 'derecho' está utilizada en este caso, obviamente, como la facultad o potestad que le asiste a una persona. Y la palabra 'humanos' refiere a que la única propiedad que ha de satisfacerse para ser titular de estos derechos es la de pertenecer a la clase de los seres humanos. Así, uno de los rasgos más decisivos de los derechos humanos está en su propio nombre, esto es, que el único requisito para ser titular de ellos es ser hombre (niño) o mujer (niña), por lo tanto, su posesión no puede estar restringida, bajo ningún aspecto, a una subclase determinada de entes ficticios. Dicho de otra manera, los derechos humanos son una clase de derechos inherentes a la especie humana como única propiedad relevante de sus beneficiarios, derivándose de esta idea que los hombres y mujeres poseen un título igual para gozar de tales derechos en la medida en que todos exhiben, en el mismo grado, esa propiedad relevante no puede ser ejercida por un ente ficticio, como lo es una persona moral.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el principio *pro personae* es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual, debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria.

"Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso. Por tanto, afirma el Más Alto Tribunal, la aplicación del principio *pro personae* en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona.

"Los anteriores razonamientos se encuentran definidos en la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, publicada en la página seiscientos cincuenta y nueve, Libro V, Tomo 1, correspondiente a febrero de dos mil doce, Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.' (se transcribe)

"De tal forma que, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, la elección de la norma aplicable, en materia de derechos humanos, será aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción.

"Cobra aplicación la tesis 1a. XIX/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página dos mil novecientos dieciocho, Libro IV, Tomo 3, correspondiente a enero de dos mil doce, Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE ELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.' (se transcribe)

"En suma, se desestiman las alegaciones de que se trata, dado que no existe en el caso violación al principio *pro homine*, porque las personas morales no se encuentran ubicadas en las prerrogativas de tal principio, al no considerarse resguardadas como las personas físicas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, que en lo conducente prevé:

"'Artículo 1o.' (se transcribe).

"Establecido lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación expuestos por el quejoso.

"En el primero de ellos, el impetrante del amparo alega de manera sustancial, que la sentencia viola lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus derechos humanos, toda vez que no se fundó en derecho, pues no analizó la competencia material relativa al nombramiento o designación de la persona o personas que deban efectuar la visita que establece el artículo 43, fracción II, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

"Lo anterior porque, a su decir, la Sala Fiscal dejó de examinar de oficio la competencia de la autoridad primigenia, por cuanto se abstuvo de analizar la debida y suficiente cita de la fracción II del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación en la orden de visita domiciliaria, con lo que le debió haber otorgado la nulidad lisa y llana por estar indebidamente e insuficientemente fundada dicha competencia, máxime cuando tales consideraciones se las hizo saber a la juzgadora a través de su escrito libre de uno de febrero de dos mil doce.

"El indicado concepto de violación es inoperante debido a que este Tribunal Colegiado advierte que los argumentos que hace valer la parte quejosa, relativos a que la autoridad fundó insuficientemente su facultad para designar a los visitadores que llevarían a cabo la visita domiciliaria, sin invocar el primer párrafo de la fracción II del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, no lo formuló en lo conceptos de impugnación de su demanda de nulidad, de manera que la Sala Fiscal estuvo imposibilitada para emitir pronunciamiento en torno a dichas alegaciones, por lo que, al no haber sido parte de la litis del juicio origen del acto reclamado, menos pueden serlo del presente juicio de garantías.

"Sirve de apoyo a lo ya expuesto la jurisprudencia 305, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cuatro del Tomo VI, Materia Común, del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* del dos mil, Séptima Época, que dice:

"'LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.' (se transcribe)

"Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme, en el sentido de que si considera que la autoridad es competente, no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que la Sala estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad; incluso, continuó con el análisis de procedencia del juicio y, en su caso, entró al estudio de fondo de la cuestión planteada en los términos en que lo señaló en su sentencia impugnada, con lo cual evidentemente el argumento del quejoso en cuanto a la competencia para el nombramiento o designación de los visitadores que intervendrían en el procedimiento fiscalizador no puede ser materia del amparo.

"Pero además, en el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo está obligado al análisis del concepto de violación relativo a la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad cuando este argumento haya sido formulado como concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo; toda vez que el quejoso no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un planteamiento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, por lo que, como se expuso en los apartados precedentes, en el caso, el quejoso pretendió introducir argumentos novedosos.

"El criterio invocado está contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 219/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y uno del Tomo XXVI, correspondiente a diciembre de dos mil siete, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que dice:

"'COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.' (se transcribe)

"No es obstáculo para la anterior determinación, la circunstancia de que el ahora quejoso alegue que la Sala Fiscal dejó de examinar los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal; por cuanto la Sala se abstuvo de analizar la debida y suficiente invocación de la fracción II del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, en la orden de visita, a pesar de que dicha ilegalidad era notoria.

"Lo que es así porque si bien conforme al artículo 1o. de la Constitución Federal, se hace referencia a la aplicabilidad de las disposiciones legales en el sentido que su interpretación, sea siempre en respeto y vigencia de los derechos fundamentales, y que la actuación de la autoridad debe prevalecer en su comportamiento el respeto y la vigencia de aquéllos.

"Cierto es, porque el contenido de las indicadas disposiciones significa que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales previstos en la ley de la materia, tengan presente la verdadera razón o causa de la norma, con el fin de evitar que simples formalidades impidan un análisis de fondo del asunto.

"En cumplimiento al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual implica, en primer término, el acceso a la jurisdicción, lo que significa que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, dando con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales y, en un segundo momento, el derecho que tiene el justiciable a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución.

"Así las cosas debe estimarse que la Sala Fiscal atendió correctamente las disposiciones legales vigentes y aplicables, así como los criterios jurisprudenciales también vigentes, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpretan las disposiciones normativas aplicables en cada caso en particular, los requisitos que deben contener las demandas como es el agravio que le genera una resolución impugnada; por tanto, aun cuando los citados preceptos normativos establecen la garantía de tutela jurisdiccional efectiva, entendida ésta como el deber del Estado, a través de sus órganos judiciales, de atender preferentemente el fondo de los planteamientos realizados por los justiciables, de manera completa e imparcial; también cierto es que tal obligación debe entenderse partiendo de los planteamientos que realicen las partes en su demanda, así como las pruebas que al respecto ofrezcan en el juicio, siguiendo las reglas que para tal efecto dispone la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a la que se apegó la Sala Fiscal al momento de dictar la sentencia impugnada en el presente juicio de garantías.

"Por lo que no puede estimarse que en el caso se deba analizar un planteamiento expuesto por el quejoso que no haya sido hecho valer ante la Sala Fiscal, conforme al sistema jurídico mexicano, consultado por la Sala Fiscal, que precisamente es la garantía que protegen los invocados preceptos internacionales.

"Aunado a lo anterior, este Tribunal Colegiado considera correcta la actuación de la Sala responsable al momento de valorar el escrito de fecha uno de febrero de dos mil doce, en donde el actor pretendió introducir el argumento de la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa, en cuanto a la designación de visitadores, pues dicha responsable calificó de novedoso el argumento que incluyó el quejoso en su escrito libre, ya que tal manifestación no había sido formulada en el momento procesal idóneo, siendo éste, en su escrito de demanda.

"En efecto, de considerar como lo hace el quejoso, haría nugatoria la garantía de seguridad y certeza jurídica que debe privar en todo proceso, dado que equivaldría a establecer que en la instancia administrativa, el quejoso aun cuando no haya hecho valer argumentos tendentes a demostrar la supuesta ilegalidad de los actos que combate, todo argumento que hiciera valer en el amparo, sería procedente analizarlo, sin importar si fue materia de controversia en el juicio de origen, lo que atentaría contra la seguridad jurídica en perjuicio de las partes que hayan intervenido en el procedimiento relativo.

"Similar criterio asumió este Tribunal Colegiado en las sesiones de fecha catorce de junio y veintisiete de septiembre de dos mil doce, al resolver los amparos directos números 159/2012 y 493/2012.

"La quejosa, en el segundo concepto de violación que hace valer, alega en esencia que la responsable no atendió su argumento en los términos propuestos, ya que lo que manifestó en su concepto de impugnación séptimo se refirió a que el acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades del Servicio de Administración Tributaria, publicado el veintiuno de mayo de dos mil ocho, modificado el dieciocho de julio del mismo año, no fue aprobado por la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria, en los términos del artículo 10, fracciones IV y VI, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, como elemento de seguridad jurídica.

"Los argumentos anteriores son infundados, en cuanto al requisito de validez alegado por la quejosa, relativo a que para establecer la circunscripción territorial de las unidades del Servicio de Administración Tributaria, se requiere la aprobación de la Junta de Gobierno, al emitir el acuerdo por el que se establece dicha circunscripción, atento a lo siguiente:

"En efecto, el acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las Unidades del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil ocho, establece, en la parte que interesa, lo siguiente: (se transcribe).

"Ahora bien, los preceptos citados por el jefe del Servicio de Administración Tributaria, como fundamento para la emisión del citado acuerdo, especialmente los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 3, fracción XII y 37 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se desprende que al presidente del Servicio de Administración Tributaria (actualmente jefe del Servicio de Administración Tributaria), se le confirieron expresamente facultades para expedir las disposiciones administrativas necesarias, para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, entre las cuales se encuentra emitir acuerdos por los que establezca la circunscripción territorial de cada una de las unidades administrativas regionales, sin que para ejercer tal potestad se encuentre sujeto a condicionante alguna.

"En ese orden, aun cuando el artículo 10, fracciones VI y X, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria establecen que la Junta de Gobierno tiene dentro de sus atribuciones aprobar todas aquellas medidas que, a propuesta del presidente del Servicio de Administración Tributaria (actualmente jefe del Servicio de Administración Tributaria), incrementen la eficacia en la operación de la administración tributaria y en el servicio de orientación al contribuyente, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; así como el artículo 14, fracción III, establece que tiene dentro de sus atribuciones –el jefe del Servicio de Administración Tributaria–, expedir las disposiciones administrativas necesarias, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno, aquellas que considere de especial relevancia; lo cierto es que tales disposiciones no condicionan la legalidad de la emisión del acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades del servicio de administración tributaria, a la aprobación de la Junta de Gobierno del citado organismo.

"Además, la facultad para emitir el citado acuerdo se encuentra conferida expresamente por la ley al presidente del Servicio de Administración Tributaria (actualmente jefe del Servicio de Administración Tributaria), ya que el artículo 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, únicamente contempla que el presidente (hoy jefe) del citado organismo, hará del conocimiento de la Junta de Gobierno, aquellas que considere de especial relevancia; por ende, la aprobación de este último organismo, no resulta indispensable para la validez del acuerdo en comento, dado que el citado artículo no impone como requisito de validez dicha aprobación, sino contempla la posibilidad de que la Junta de Gobierno conozca ciertas disposiciones que resulten relevantes, a criterio del presidente del Servicio de Administración Tributaria.

"De ahí que debe concluirse que, opuesto a lo alegado por la quejosa, el acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades del Servicio de Administración Tributaria no es ilegal, al no haberse aprobado por la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria.

"Lo expuesto en razón de que se insiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, el presidente (actualmente jefe) del Servicio de Administración Tributaria, podrá expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, haciendo del conocimiento de la Junta de Gobierno aquellas que considere de especial relevancia.

"En ese orden, aun cuando el artículo 10 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en su fracción VI, dispone como atribución de la Junta de Gobierno de tal organismo, la de aprobar todas aquellas medidas que, a propuesta del actual jefe del Servicio de Administración Tributaria, que incrementen la eficacia en la operación de la administración tributaria, la inexistencia de esa formalidad no invalida el '… Acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades del Servicio de Administración Tributaria …', porque además de que tal precepto no la prevé como una condición necesaria para el ejercicio de la potestad reglamentaria del presidente del Servicio de Administración Tributaria (actualmente jefe del Servicio de Administración Tributaria), el artículo 14, fracción III, de la legislación antes citada, concede la potestad a su titular, para ejercer su facultad de expedir las disposiciones administrativas, sin necesidad de que la Junta de Gobierno otorgue su aprobación, pues como quedó demostrado, el propio precepto deja a la libre elección del presidente del Servicio de Administración Tributaria, de considerar cuáles acuerdos son, a su parecer, de especial relevancia para ponerlos del conocimiento de la Junta de Gobierno; de ahí que la potestad del presidente en mención se encuentre prevista en el artículo 14, fracción III, y no así en las fracciones VI y X del artículo 10 de la disposición señalada.

"Aunado a lo anterior, debe agregarse que este Tribunal Colegiado estima que la Junta de Gobierno no necesariamente debe autorizar y/o aprobar todas aquellas medidas que el presidente del Servicio de Administración Tributaria (actualmente jefe del Servicio de Administración Tributaria) emita, sino únicamente aquellas que estime especiales por la relevancia que tienen, de ahí que sean infundadas las manifestaciones de la peticionaria de garantías.

"Es aplicable a lo anterior la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la pá-

gina dos mil ochenta y siete del Tomo XXXII, correspondiente a julio de dos mil diez, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que dice:

"'SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LA LEGALIDAD DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE SEA SOMETIDO A ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE DICHO ÓRGANO.' (se transcribe)

"También es aplicable la tesis del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página dos mil setenta y cuatro del Tomo XXX, correspondiente a julio de dos mil nueve, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que dice:

"'SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD CONFERIDA EXPRESAMENTE AL JEFE DE DICHO ÓRGANO PARA EXPEDIR EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE PREVIAMENTE SEA SOMETIDO A ESTUDIO Y APROBACIÓN DE SU JUNTA DE GOBIERNO.' (se transcribe)

"En su tercer concepto de violación manifiesta que la sentencia controvertida es producto de una indebida interpretación a los artículos 28 y 45 del Código Fiscal de la Federación, pues en forma incorrecta concluye que la autoridad fiscal sí contaba con las facultades para requerirle papeles de trabajo, ante la cita del artículo 45 del citado ordenamiento legal; cuando lo cierto es, que tal precepto, al referirse a los 'demás papeles' que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales en momento alguno se refiere a los papeles de trabajo, ya que no deben confundirse dichos términos, máxime cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no deben confundirse los papeles relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales con los papeles de trabajo. Continúa manifestando que es incorrecto que la Sala responsable haya estimado que el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación le imponga la obligación a su representada de poseer o entregar papales de trabajo; concluye manifestando que los papeles de trabajo no pueden ser considerados como parte de su contabilidad, puesto que por sus características no pueden trascender a la esfera jurídica del gobernado.

"El motivo de inconformidad se considera infundado.

"En efecto, se estima que la actuación de la Sala responsable es correcta, ya que, primeramente, la referencia que hizo al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo, se estima adecuada, pues es este dispositivo el que señala cómo se integra la contabilidad de los contribuyentes:

"'Artículo 28.' (se transcribe)

"De la lectura al artículo inserto, se advierte claramente que la contabilidad de los contribuyentes está integrada, entre otros elementos, por los papeles de trabajo, razón por la que no puede estimarse ilegal la solicitud que le hiciera la autoridad fiscal en el oficio ********** de seis de julio de dos mil diez, cuando le requirió papeles de trabajo.

"Requerimiento que se considera legal, ya que, como se indicó en párrafos que preceden, el artículo 28, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación considera que los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad de los contribuyentes, situación por la que se considera que la autoridad fiscal podrá, al momento de ejercer sus facultades de comprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 42, fracción III, del mismo ordenamiento legal, requerir la exhibición de los que estime necesarios para ejercerlas, toda vez que, se insiste, es parte de los registros que los gobernados deben mantener y que sirven de respaldo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A.539 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 1543 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, XXIV, septiembre de 2006, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"'VALOR AGREGADO. LOS PAPELES DE TRABAJO COMO ELEMENTOS DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ADMINICULADOS CON LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y LAS FACTURAS QUE ACREDITAN LOS TRASLADOS DE LA CONTRIBUCIÓN, SON EFICACES PARA DEMOSTRAR EL ACTO DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4o. A 4o.-C DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO QUE SE REFIEREN A SU ACREDITAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2005).' (se transcribe)

"Aunado a lo anterior, se estima que el concepto de violación es infundado, ya que es necesario establecer la finalidad que persiguió la autoridad fiscal, al emplear el término 'papeles de trabajo' en el oficio ********** de seis de julio de dos mil diez, la que consistió en continuar con su ejercicio de facultades de comprobación requiriendo para tal efecto la documentación comprobatoria que acreditase el origen de los depósitos bancarios detecta-

dos por la fiscalizadora, según se aprecia de la siguiente transcripción del citado oficio: (se transcribe).

"Transcripción de la cual, se advierte que, opuesto a lo alegado por la quejosa, la Sala responsable resolvió el caso sometido a su jurisdicción, ponderando los aspectos jurídicos que fueron expresados por esta última, en los términos en que fueron planteados, atento a lo siguiente:

"En efecto, los artículos 42, primer párrafo, fracciones II y III, antepenúltimo párrafo y 45 del Código Fiscal de la Federación, que se invocaron, entre otros, en el oficio ********** de seis de julio de dos mil diez, establecen:

"'Artículo 42.' (se transcribe)

"'Artículo 45.' (se transcribe)

"Como se advierte, los artículos transcritos facultan a las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento, por parte de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, a sus obligaciones fiscales, las cuales pueden ejercerse de diversas formas, entre ellas, las previstas en las fracciones II y III, a saber, mediante el requerimiento de exhibición de la contabilidad y/o para que se proporcionen datos, informes y documentos, ya sea en el domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, y mediante la práctica de visitas para revisar su contabilidad, bienes y mercancías, debiendo resaltarse que las autoridades fiscales pueden ejercer estas facultades y las demás previstas en las otras fracciones del artículo 42 de manera conjunta, indistinta o sucesivamente, iniciándose con el primer acto que se notifique al causante.

"Acorde con lo anterior se estima que la Sala responsable obró conforme a derecho al determinar que el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación faculta a la autoridad hacendaria para solicitar cualquier tipo de información y documentación, en el caso aquella que tiene por objeto aclarar el '… origen de los depósitos bancarios observados por la fiscalizadora [descritos en el oficio en estudio] …'

"Lo expuesto, en razón de que de ninguna forma puede soslayarse que la actuación de la autoridad demandada en el procedimiento de fiscalización se dio dentro de una visita domiciliaria, en la cual se le requirió expresamente que debía exhibir documentación comprobatoria de sus operaciones, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de la revisión (origen de diversos depósitos bancarios).

"A ese respecto debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 98/2011, publicada en la página novecientos veintisiete, Tomo XXXIV, correspondiente a julio de dos mil once, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que dice:

"'VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS PARA REQUERIR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA A LOS CONTRIBUYENTES.' (se transcribe)

"En ese criterio deriva de la contradicción de tesis 124/2011, en cuya ejecutoria se destaca, en lo que interesa: (se transcribe).

"De la jurisprudencia y de su ejecutoria transcritas en párrafos anteriores, puede concluirse que, contrario a lo alegado por la quejosa, la cita de los artículos 42, primer párrafo, fracciones II y III, así como en el antepenúltimo párrafo y 45 del Código Fiscal de la Federación, en el oficio ********** de seis de julio de dos mil diez, entre otros, permite establecer que no torna ilegal que se le haya requerido la información y/o documentación, específicamente respecto el '… origen de los depósitos bancarios, agregando que aclarara, ampliara y, detallara el origen de los diversos depósitos que se relatan en el precitado oficio, proporcionando el soporte documental que ampara su dicho y, a su vez, se anexó … instructivo para la elaboración del papel de trabajo, relativo a los depósitos registrados en sus estados de cuentas bancarias …', al precitado oficio.

"Ello porque la facultad de requerir al contribuyente parte de la documentación comprobatoria de las obligaciones fiscales, vincula a los documentos en los que se hacen constar el origen de los depósitos, si corresponden a préstamos, depósitos por recuperación de éstos, aportaciones de capital y/o para futuros aumentos de capital, ingresos o anticipos cobrados, reintegración de gastos, lo que, evidentemente, tiene relación con los papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

"Esto es, del análisis del requerimiento de información y documentos para determinar el origen de diversos depósitos bancarios, se circunscribió a los elementos que la codificación fiscal señala como integrantes de la contabilidad, cuya facultad no se limita a requerir tales elementos, sino además diversos datos, documentos e informes para ejercer su función fiscalizadora.

"Por ende, de ninguna forma se torna ilegal que en el oficio en trato, se haya formulado a la hoy quejosa el requerimiento de diversa información y/o documentación, indicando el concepto 'papeles de trabajo', pues tal circunstancia no incide en su legalidad, en la medida en que la autoridad fiscal, en términos de los artículos 42, primer párrafo, fracciones II y III, así como en el antepenúltimo párrafo y 45 del Código Fiscal de la Federación, está facultada de requerir la contabilidad, así como datos y otros documentos o informes.

"En otro orden, se considera innecesario desentrañar el concepto 'papeles de trabajo', como lo alega la quejosa, pues como se precisó, el requerimiento de información y/o documentación para establecer el origen de diversos depósitos bancarios, se formuló dentro de una visita domiciliaria, por lo que, como lo resolvió la responsable, se relaciona con los papeles que sirven o pueden servir de sustento para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales declaradas por el propio contribuyente, que forman parte de su contabilidad, la cual en términos del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad se integra por los sistemas y registros contables, por los 'papeles de trabajo', registros, cuentas especiales, libros y registros sociales, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.

"Esto es, en el oficio ********** de seis de julio de dos mil diez, el administrador local de Auditoría Fiscal de Veracruz, solicitó a la contribuyente proporcionara la información y/o documentación, relacionada con el 'origen de los depósitos bancarios', lo cual constituye elementos vinculados con la propia contabilidad para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales declaradas por la contribuyente hoy quejosa.

"Por consiguiente, si el requerimiento de información consistió en demostrar con la documentación respectiva el 'origen de los depósitos bancarios correspondientes', cuya facultad la contemplan los artículos 42, primer párrafo, fracciones II y III, así como en el antepenúltimo párrafo y 45 del Código Fiscal de la Federación, ello genera certeza al contribuyente de que la autoridad está actuando dentro de los límites y atribuciones que le confiere la ley, pues los elementos requeridos forman parte de la contabilidad del contribuyente, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de la autoridad, la cual no se limita a requerir tales elementos, sino, además, diversos datos, documentos e informes para ejercer su función

fiscalizadora, sin que se limite a que ésta pueda llenarse a través de un instructivo.

"Como lo sostuvo la juzgadora, no es óbice a lo anterior el hecho de que en el oficio de requerimiento de información, se advierte que la autoridad hacendaria no citó el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en razón de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó criterio en el sentido de que era innecesaria su cita, porque se presumía que el contribuyente, al conocer sus obligaciones, tenía conocimiento de cuáles son los elementos que conforman su contabilidad; aunado a que como se ha precisado, dicha autoridad está actuando dentro de los límites y atribuciones que le confieren los artículos 42, primer párrafo, fracciones II y III, antepenúltimo párrafo y 45 del Código Fiscal de la Federación.

"El criterio anterior fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 258/2009, consultable con la tesis de jurisprudencia 2a./J. 127/2009, página quinientos noventa y ocho del Tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que dice:

"'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ES INNECESARIO QUE LA AUTORIDAD FISCAL FUNDE LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN EL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CONTABILIDAD.' (se transcribe)

"Por último, en su cuarto de concepto de violación, la quejosa señala que resulta ilegal la sentencia impugnada, al partir de una interpretación errónea, considerando que la autoridad fiscal no estaba obligada a aplicar la figura del acreditamiento en beneficio del contribuyente, al tratarse de un derecho personalísimo, cuyo ejercicio le corresponde exclusivamente al contribuyente, ya que a juicio del quejoso en nuestra litis, el derecho jamás deja de ser personalísimo, aunque lo aplique la autoridad, con lo cual resulta inaplicable la jurisprudencia empleada por la Sala Fiscal en el fallo controvertido, ya que el hecho de que la autoridad le aplicara dicha figura de acreditamiento no ocasionaría la transmisión de dicho derecho personal.

"El motivo de inconformidad anterior es infundado.

"En efecto, este Tribunal Colegiado considera correcta la determinación de la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, relativo a que la autoridad fiscal no se encontraba obligada

a aplicar la figura de acreditamiento establecida en los artículos 8 y 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuyo contenido señala:

"'Artículo 8.' (se transcribe)

"'Artículo 11.' (se transcribe)

"De lo antes transcrito, se desprende que tal como concluyó la Sala responsable, dichos artículos establecen un derecho para ejercerse exclusivamente por el contribuyente, con lo que no es posible interpretarlo como una obligación para la autoridad fiscalizadora, en cuanto a aplicarlo en la mecánica para arribar al resultado fiscal de un ejercicio en revisión, esto es, la autoridad fiscal, al momento de la determinación del crédito fiscal a la contribuyente, no tenía motivo alguno que la obligara a formular tal acreditamiento, aunado a que no existió documental alguna con la que se demuestre que la contribuyente auditada optó por el acreditamiento de cantidad alguna.

"Sin que pase desapercibido el hecho de que no sea suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal el argumento del quejoso, relativo a que la jurisprudencia que citó la Sala Fiscal en su fallo se refiera a una hipótesis distinta al del caso en particular, ya que, al margen de tal situación, dicha tesis fue empleada por la juzgadora por analogía, es decir, en ningún momento señaló que aplicara exactamente al asunto, sino únicamente le dio una aplicación análoga con el objeto de ilustrar que el derecho de acreditamiento es personalísimo. En este sentido, con independencia de que la autoridad fiscal hubiera aplicado dicho derecho del contribuyente en el cálculo del crédito fiscal, no hubiese significado que el derecho dejará de ser personalísimo, lo cierto es que no existe fundamento legal alguno que establezca como una obligación para la Administración Local de Auditoría Fiscal de Veracruz en aplicar el acreditamiento conferido en el marco legal exclusivamente a los contribuyentes para arribar al resultado fiscal del ejercicio."

CUARTO.—**Determinación de la existencia de la contradicción de criterios.** Este Alto Tribunal determina que existe la contradicción de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados involucrados se ocuparon de la misma cuestión jurídica, tomaron en consideración elementos similares y llegaron a conclusiones distintas, con lo que están satisfechos los requisitos para que exista contradicción de criterios.

El propósito para el que fue creada la figura de la contradicción de tesis es salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios opuestos y realizar la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se precisa de la reunión de los siguientes supuestos, para que exista contradicción de tesis:

a. La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,

b. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia de este Tribunal Pleno cuyos rubro, texto y datos de identificación se reproducen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son

cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7)

A efecto de demostrar la existencia de la contradicción, conviene tener presentes los antecedentes de cada caso.

Por cuanto al amparo directo del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el número de expediente 315/2012, destaca que:

1. El once de mayo de dos mil doce, **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución 1647 de veintinueve de marzo de dos mil seis, determinante del crédito fiscal **********, cuyo pago se pretendía hacer efectivo por la Administración Local de Recaudación Norte del Distrito Federal del Sistema de Administración Tributaria, mediante procedimiento administrativo de ejecución.

En la demanda, la actora alegó desconocer tanto el fundamento como el origen del crédito fiscal.

2. La Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de nulidad, mediante resolución de dieciocho de mayo de dos mil doce, la desechó por extemporánea, toda vez que el requerimiento por el que tuvo conocimiento de la existencia del crédito fiscal fue practicado el trece de febrero de dos mil doce, por lo que si desde esa fecha conoció de la existencia de aquél, estuvo en aptitud de impugnarlo conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aclarando que, por la cuantía del asunto, el caso se situaba en los supuestos de procedencia del juicio en la vía sumaria.

3. Inconforme con la anterior determinación, el representante legal de la persona moral actora promovió recurso de reclamación, alegando, en lo medular, que la hipótesis que prevé el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se refiere al supuesto en que el actor desconoce la resolución que desea impugnar, imponiendo como único requisito señalar la autoridad a quien le atribuye el acto y su notificación o ejecución, los que, en la especie, satisfizo. En esta virtud, que la impugnación no resulta extemporánea, en tanto adujo el desconocimiento del origen y fundamento del acto reclamado, sin que del mandamiento de ejecución y requerimiento de pago se puede desprender el conocimiento legal de tales circunstancias.

4. El seis de agosto de dos mil doce, la Segunda Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó resolución en el citado recurso, confirmando el desechamiento de la demanda de nulidad, al considerar que si la actora acompañó a su demanda el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago a través del cual se pretendió exigir el crédito fiscal, diligencias que tuvieron verificativo el trece de febrero de dos mil doce, resultaba inconcuso que a partir de ese momento tuvo conocimiento de la existencia del referido crédito, aunque no de su contenido y, por tanto, en esa fecha inició el plazo de quince días que prevé el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para impugnar no sólo el desconocimiento del crédito, sino las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo de ejecución.

5. En contra de esa determinación, mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil doce, **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo del que finalmente conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito,

el que con fecha seis de junio de dos mil trece dictó sentencia en el sentido de otorgar la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, declarara fundados los agravios expuestos en el recurso de reclamación interpuesto contra el desechamiento de la demanda de nulidad y ordenara su admisión y, seguido el juicio por todos sus trámites, dictara la resolución definitiva que en derecho correspondiera.

En cuanto a los antecedentes del amparo directo 647/2012, consta que:

1. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil once, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución contenida con el oficio número **********, de fecha ocho de febrero de dos mil once, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Veracruz, mediante la cual determina diversos créditos fiscales en cantidad total de $ ********** (**********), por los conceptos de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial a la tasa única, multas y recargos, por el ejercicio fiscal de dos mil ocho.

2. De la demanda conoció la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la que mediante resolución de primero de marzo de 2012 determinó reconocer la validez de la resolución impugnada, al resultar infundados los argumentos expuestos por la actora.

Ahora bien, tanto de los antecedentes narrados, como de las transcripciones hechas en el considerando precedente, se advierte que en los casos que analizaron los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito, se presentaron los siguientes elementos comunes:

En ambos casos, los tribunales conocieron de sendas resoluciones dictadas por diversas Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que en amparo directo fueron impugnadas por personas morales, por conducto de sus representantes legales. Una, que declaró la validez de la resolución impugnada. La otra, que en el recurso de reclamación confirmó el desechamiento de la demanda de nulidad planteada.

En cada juicio, los quejosos enderezaron planteamientos tendentes a justificar una interpretación amplia o extensiva en su favor. Uno, respecto del

artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por cuanto a la procedencia de la admisión de la demanda de nulidad, en el supuesto en que el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar. Otro, respecto a la aplicación de diversa tesis de jurisprudencia, a efecto de justificar la procedencia del examen de los conceptos de violación planteados en torno a la incompetencia de la autoridad administrativa que decretó una orden de visita domiciliaria.

En el examen de tales planteamientos, ambos tribunales acudieron a la interpretación del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desentrañar la titularidad de derechos humanos y de las garantías para su protección, por parte de las personas morales y, en su caso, sobre la procedencia de una interpretación pro persona en los supuestos particulares que adujeron los quejosos.

Asimismo, de la lectura de los fallos, motivo de la presente contradicción, se advierte que ésta se actualiza.

De la sentencia que recayó en el amparo directo 647/2012, se destacan las siguientes consideraciones:

Con relación al primer concepto de violación, en el que se argumentó que la responsable se abstuvo de llevar a cabo el análisis oficioso de la debida y suficiente fundamentación de la competencia de la autoridad primigenia en la orden de visita domiciliaria que se impugnó, por cuanto a la facultad para designar a la persona o personas que debían efectuarla, la quejosa expuso en apartado previo, diversas consideraciones tendentes a justificar la procedencia de su examen, al tenor de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2006, por estimar que es la de mayor beneficio al gobernado y la que verdaderamente respeta los derechos humanos y sus garantías de manera extensiva.

En dicho apartado sostiene la contradicción entre el criterio que sustentó la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2006, de rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA." y el que se recoge en la diversa tesis 2a./J. 219/2007, identificable bajo la voz: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA-

CIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", en la que también la Segunda Sala del Máximo Tribunal abandonó el criterio de la anterior.

Al respecto, señala, conforme a la tesis citada en primer término, atendiendo a las consideraciones plasmadas en la ejecutoria de la que derivó, la circunstancia de que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa omitan hacer pronunciamiento de oficio, en cuanto a la competencia de la autoridad demandada, no deja en estado de indefensión al actor, puesto que, al promover el amparo directo, puede plantear en forma expresa el tema de la incompetencia, aun cuando no lo hubiera propuesto en los conceptos de impugnación que formuló en la demanda de nulidad.

En cambio, apunta, en la diversa tesis que cita, la Segunda Sala, a partir de una nueva reflexión sobre el tema, sostiene que en el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al análisis del concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, o de la omisión de su estudio, cuando este argumento haya sido aducido como concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo, o bien, haya sido motivo de pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario, el estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un argumento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no lo hizo valer o porque la autoridad responsable, al estimar que la demandada es competente, no formuló pronunciamiento al respecto.

Este cambio radical de criterio, concluye, restringe los derechos humanos y sus garantías, privando de mecanismos de defensa frente a las decisiones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por lo que, al ser la incompetencia de la autoridad administrativa una cuestión de orden público que incide directamente en la eficacia y validez del acto de autoridad, el criterio que debe prevalecer y aplicársele es el primeramente acogido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A fin de sostener la aplicación del mencionado criterio en el examen de los conceptos de violación que adujo respecto de la incompetencia de la auto-

ridad primigenia, invoca los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, así como los diversos 1, 2, 3, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1, 2, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que desprende, en lo que al caso interesa, lo siguiente:

• A partir del diez de junio de dos mil once, el Estado Mexicano, vía legislación nacional y vía tratados internacionales, se comprometió a:

a) Interpretar las normas relativas a derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

b) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

c) Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

• Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, incluidos los de orden fiscal.

• Los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal prevén algunas de las garantías de audiencia, defensa adecuada, debido proceso, legalidad, autoridad competente, fundamentación y motivación, y mandamiento escrito, garantías de seguridad jurídica que fungen como un mecanismo legal para prevenir o reparar la violación al derecho mismo a la seguridad jurídica.

Bajo tales premisas, en lo particular, atendiendo al principio *pro homine* que se recoge en el artículo 1o. constitucional, sostiene que en el examen de los conceptos de violación que planteó, debe prevalecer el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 99/2006, pues no es sólo el que mayor beneficio brinda al gobernado, sino el que verdaderamente respeta los derechos humanos y sus garantías de manera extensiva, lo que implica que exista la posibilidad de aducir conceptos de violación relativos a la falta o insuficiente análisis de la competencia y su motivación ante los Tribunales Colegiados, aun cuando no se haya hecho valer en el juicio contencioso administrativo.

Cabe destacar que respecto de cada uno de los conceptos de violación que expresó en su demanda de amparo, la quejosa invocó la violación de los

artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales; 1, 2, 3, 14 y 17 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1, 2, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que la Sala responsable no se fundó en derecho, ni hizo una interpretación exegética, ni respetó el obligado principio *pro homine*, dejando con ello de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, de impartir justicia de manera imparcial, de favorecer la protección más amplia y de promover y garantizar los derechos humanos.

Asimismo, en cada caso, subrayó que la responsable se encuentra obligada a proteger y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 1o. constitucional, en relación con los diversos 16 de la Ley Fundamental, 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en vinculación con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, por los motivos que refiere.

En el examen particular de los anteriores argumentos de la quejosa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito determinó que resultaban inoperantes, al estimar que el principio pro persona o *pro homine*, no cobra aplicación en la hipótesis de las personas morales, atento a las siguientes consideraciones:

• Toda persona física es titular de derechos humanos, pues su reconocimiento es una consecuencia de la afirmación de la dignidad humana; sin embargo, tal acontecimiento no se actualiza respecto de una persona moral, como en el caso la quejosa, pues representa un ente ficticio notoriamente carente del factor relativo a la dignidad humana, siendo este último el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos, valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.

• Se concluye lo anterior, a partir de contextualizar las dos unidades semánticas que componen la expresión "derechos humanos". La palabra "derecho", utilizada en este caso, como la facultad o potestad que le asiste a una persona, y la palabra "humanos", que refiere a que la única propiedad que ha de satisfacerse para ser titular de estos derechos es la de pertenecer a la clase de los seres humanos. Así, uno de los rasgos más decisivos de los derechos humanos está en su propio nombre, esto es, que el único requisito para ser titular de ellos es ser hombre (niño) o mujer (niña), por lo tanto, su posesión no puede estar restringida, bajo ningún aspecto, a una subclase determi-

nada de entes ficticios. Dicho de otra manera, los derechos humanos son una clase de derechos inherentes a la especie humana como única propiedad relevante de sus beneficiarios, derivándose de esta idea que los hombres y mujeres poseen un título igual para gozar de tales derechos en la medida en que todos exhiben, en el mismo grado, esa propiedad relevante que no puede ser ejercida por un ente ficticio, como lo es una persona moral.

• El Máximo Tribunal de la Nación ha definido el principio pro persona como criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria.

• Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso. De ahí que el Más Alto Tribunal afirme que la aplicación del principio pro persona en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, conforme lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO *PRO PERSONAE*. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."

• Por tanto, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, la elección de la norma aplicable, en materia de derechos humanos, será aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción, invocando en este punto la tesis 1a. XIX/2011 (10a.), también de la Primera Sala del Alto Tribunal, bajo el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE."

De lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito colige que es de desestimarse lo alegado por la quejosa, en tanto no existe en el caso violación al principio *pro homine*, porque las personas morales no se encuentran ubicadas en las prerrogativas de tal principio, al no considerarse resguardadas como las personas físicas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del criterio sustentado por el citado tribunal emanó la tesis de rubro y texto siguientes:

"DERECHOS HUMANOS. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE SU TITULARIDAD.—Sobre la base de que toda persona física es titular de derechos humanos, se deriva que el reconocimiento de éstos es una consecuencia de la afirmación de la dignidad humana, por lo que no puede actualizarse violación a aquéllos respecto de una persona moral, pues ésta constituye un ente ficticio y, por ende, carente del factor relativo a la dignidad humana, siendo éste el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos; valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce como calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente, de manera que, partiendo de un análisis básico, al contextualizar las dos unidades semánticas que componen la expresión 'derechos humanos', la primera palabra está utilizada como la facultad que le asiste a una persona y, la segunda, alude a que la única propiedad que ha de satisfacerse para ser titular de estos derechos es la de pertenecer a los seres humanos, lo que significa que excluye a las personas morales."[1]

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al examinar los conceptos de violación que planteó la quejosa, en suplencia de la queja deficiente, los estimó esencialmente fundados.

Por principio, precisó que, de lo expuesto por la quejosa en tales conceptos, se advertía que proponía una interpretación al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, diversa de la efectuada por la Sala responsable.

Así, mientras la Sala sostuvo que si bien el precepto establece que cuando se manifiesta desconocer un acto o resolución, se admite la demanda para que se dé a conocer el acto en la contestación, debe atenderse el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda en la vía sumaria, a contar desde el momento en que se supo sobre la existencia de aquel acto, aunque se desconozca su contenido, y que en todo caso debe impugnarse el mandamiento de ejecución con base en el que precisamente se conoció sobre la existencia de aquel acto, la quejosa considera que la norma

---

[1] Décima Época. Registro digital: 2003029. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. Tipo de tesis: aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Localización: Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, materia constitucional, tesis VII.2o.A.2 K (10a.), página 1994.

contiene un procedimiento especial, en el que basta que se exprese en la demanda que se desconoce el origen y fundamento del acto impugnado y la autoridad a quien se imputa su notificación o ejecución, como mero requisito de procedencia para su admisión, sin que se señale el momento en que se debe acudir a impugnar la resolución que no conoce, ni plazo que, al fenecer, tenga como resultado la extemporaneidad de la demanda.

En esta situación particular, argumentó, se considera que es necesario llevar a cabo el ejercicio de suplencia de la queja de los conceptos de violación deficientes, pues si bien la interpretación normativa planteada se estima correcta, esto resulta en la medida de que se advierte la necesidad de acudir al principio constitucional de interpretación conocido como pro persona, a fin de determinar la mayor protección al derecho humano a la tutela judicial efectiva a favor de la persona jurídica quejosa, en un caso donde la interpretación restrictiva sustentada por la autoridad responsable incide negativamente en el mencionado derecho de tutela judicial, dado que, con base en una interpretación limitada, se confirmó en el acto reclamado el desechamiento de la demanda de nulidad promovida por la actora.

En la inteligencia que la quejosa es una persona moral, el análisis a realizar, supone como premisa previa determinar si existe la tutela de derechos humanos a favor de tales entes y, de ser así, en qué casos.

A este fin, en primer término, atendió al contenido del artículo 1o. constitucional, señalando que, de conformidad con esta disposición, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección constitucional, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia Constitución lo autoriza.

Que, asimismo, prevé que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en tanto que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Finalmente, que la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos o libertades de las personas.

De lo reseñado, afirmó, destaca que en el artículo 1o. constitucional, en su primer párrafo, el Poder Reformador de la Constitución estableció que todas las personas deben gozar de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

De ahí que la cuestión a resolver –reiteró– estriba en determinar si la expresión "todas las personas" empleada en el Texto Constitucional, comprende a las personas jurídicas y, por ende, si estas últimas gozan de la protección de derechos humanos.

Para dirimir esta cuestión acudió al examen de los antecedentes legislativos que dieron lugar a la reforma del artículo 1o. constitucional, en lo particular, del apartado III, de consideraciones del dictamen de ocho de marzo de dos mil doce, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, de la Cámara de Senadores.

De ese examen advirtió el propósito del Constituyente Permanente en el sentido que el término persona, si bien está referido a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad, debe ampliarse a las personas jurídicas "*en los casos en que ello sea aplicable*", lo que significa el reconocimiento de que las personas jurídicas, al igual que las físicas, son titulares de iguales derechos y deberes constitucionales, con la importante precisión por cuanto a que, tratándose de personas ideales, la tutela de derechos humanos a su favor sólo procederá en casos determinados.

Enseguida, acudió al derecho constitucional comparado, refiriendo a las disposiciones atinentes de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana de mil novecientos cuarenta y nueve, y de la Constitución de la República Portuguesa de veinticinco de abril de mil novecientos setenta y seis, de las que observó que establecen de modo expreso la tutela de derechos humanos a favor de las personas jurídicas. En el primer caso, los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas con sede en el país, en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas; y, en el segundo, se reconoce

que las personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes compatibles con su naturaleza.

Asimismo, estimó de la mayor relevancia acudir a los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como instancia competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, remitiéndose al caso "Cantos vs Argentina".

En este contexto, destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuó la interpretación que debe darse al artículo 1o., inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al establecer que toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, y cuando una norma atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria; de modo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular su conducta frente a otros y limitar su responsabilidad; en consecuencia, sentó la premisa de que los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en los derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre y representación; asumir una interpretación contraria a la establecida en esa premisa llevaría a resultados irrazonables y a dejar sin protección un importante conjunto de derechos humanos. Por lo tanto, concluyó que si bien no ha sido reconocida la figura de las personas jurídicas de manera expresa por la Convención Americana, a diferencia de su reconocimiento en la Convención Europea, eso no debía restringir la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, el individuo pudiera acudir al sistema interamericano para hacer valer derechos humanos, aun cubiertos por una ficción o figura jurídica creada por el mismo sistema del derecho.

Corolario de lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito establece que el artículo 1o. constitucional dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que la expresión "todas las personas" empleada en el Texto Fundamental comprende no sólo a las personas físicas consideradas en su calidad de seres humanos, sino a las personas jurídicas, aunque en este supuesto únicamente en los casos en que ello sea aplicable.

Que dicha interpretación es uniforme con lo definido en el derecho constitucional comparado, al que resulta válido acudir por su calidad de doctrina universal de los derechos humanos, como la Ley Fundamental para la

República Federal Alemana, que en su artículo 19.3 dispone que los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas con sede en el país, en tanto por su propia naturaleza sean aplicables a las mismas, o como la Constitución de la República Portuguesa, que en su artículo 12 señala que las personas jurídicas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes que sean compatibles con su naturaleza.

Que la protección de derechos humanos a personas jurídicas ha sido tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia al caso "Cantos vs. Argentina", en la que sostuvo que toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana y cuando la norma atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria; de modo que el derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular su conducta y limitar su responsabilidad, sentando la premisa de que los derechos y atribuciones de las personas morales se resuelven en los derechos y obligaciones de las personas físicas; de suerte que si bien no ha sido reconocida de manera expresa la figura de las partes jurídicas por la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo Número 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, ello no debía restringir la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, el individuo puede acudir al sistema internacional de derechos humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el propio sistema del derecho.

En este orden de ideas, concluye que es de admitir que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable, con arreglo a la naturaleza de esas personas, al constituir figuras y ficciones jurídicas creadas por el propio sistema del derecho, cuyos derechos y obligaciones se resuelven en los de las personas físicas.

Precisado esto, procedió a determinar en qué supuestos es posible reconocer dicha protección a las personas jurídicas. Para ello, consideró necesario atender al contenido del derecho humano vulnerado, para el propósito de definir si el derecho humano comprometido es consustancial a las personas físicas en su calidad de seres humanos, o bien, si existen razones objetivas que justifiquen su protección sólo en favor de ellas, pero no así de las personas jurídicas, pues en el supuesto de inexistencia de esas razones justificativas, la protección deberá extenderse a las personas ideales.

En el caso, estimó se comprometía de manera predominante el derecho humano a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que de la interpretación que se haga del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dependerá la admisión de la demanda de nulidad planteada o su desechamiento, según que esa interpretación sea extensiva o restrictiva; y de atenderse a la primera de tales interpretaciones, con apoyo en la directriz constitucional que manda preferir la interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas –incluidas, desde luego, las jurídicas cuando ello sea aplicable– la protección más amplia, el resultado será la eficiente protección del derecho humano a la tutela judicial efectiva, respecto del cual ese órgano jurisdiccional afirmó no advertir razones objetivas que justifiquen un trato judicial diferente en la tutela de dicho derecho entre las personas físicas y las jurídicas.

A fin de demostrar que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe recibir un tratamiento constitucional sustancialmente distinto, según que el agraviado sea una persona física o una jurídica, remitió al contenido del mencionado derecho, en concordancia con lo que sobre el particular ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este tenor, refirió que el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 35/2005-PL, estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho gradual y sucesivo, que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz; de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son los derechos de audiencia y de debido proceso.

Que la Segunda Sala, por su parte, al fallar la contradicción de tesis 401/2012, consideró que la tutela efectiva es un derecho complejo y comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, así como el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución; a la par que ese concepto se encuentra íntimamente ligado con la prohibición de la indefensión, por lo que se relaciona directamente con el concepto de formalidades esenciales del procedimiento que tutela, a su vez, el artículo 14 de la Constitución Federal.

Conforme a lo reseñado, apuntó, el tratamiento constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser distinto cuando el titular del derecho humano es una persona física que cuando lo es una persona jurídica, si se

toma en cuenta que por su contenido es el mismo para ambas clases de personas y que no existen razones objetivas que justifiquen un trato desigual entre los sujetos mencionados, puesto que siguiendo el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho derecho a la tutela es gradual y sucesivo, se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que deben ser superadas hasta lograr su plena eficacia, en tanto que sobre el mismo derecho humano la Segunda Sala considera que es un derecho complejo que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, así como los derechos al debido proceso, a que se dicte una decisión ajustada a la ley, a recurrir la decisión y a obtener su ejecución; de donde se concluye que la tutela judicial efectiva descansa en el principio de igualdad de todas las personas, tanto físicas como jurídicas, a tener el libre acceso a la jurisdicción del Estado.

Dilucidados los temas relacionados con la protección de la tutela judicial efectiva a favor de personas jurídicas, así como el contenido jurisprudencial de tal derecho humano, y previo aun al estudio de la cuestión de fondo, estimó que todavía era necesario decidir si conforme a las premisas reconocidas, es válido suplir la deficiencia de la queja en el supuesto en que se ventila la violación del derecho humano específico de tutela judicial en perjuicio de una persona ideal.

En este sentido, atendiendo a la tesis aislada IV.2o.A.6 K (10a.), de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO HUMANO EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.", que emitió ese propio tribunal, así como a los diversos precedentes de los que emanó, estimó que las consideraciones con base en las cuales este Tribunal Colegiado de Circuito determinó la procedencia de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando se advierta la violación de un derecho humano específico en perjuicio de personas físicas, son igualmente válidas, tratándose de personas jurídicas, pues además de subsistir idénticas razones de importancia y trascendencia de la restauración o restitución del ordenamiento constitucional vulnerado, debe añadirse que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable con arreglo a la naturaleza de esas personas, al constituir figuras y ficciones jurídicas creadas por el propio sistema del derecho, dado que las obligaciones y derechos de las personas ideales se resuelven en los de las físicas.

Supuestos en los que el derecho humano específico que se encuentra comprometido en la controversia, por su propio contenido, deben recibir el

mismo tratamiento constitucional, como sucede, en la especie, con el derecho a la tutela judicial efectiva, donde no se advierte la existencia de razones justificativas objetivas que diferencien ese tratamiento constitucional, según se trate de personas físicas o jurídicas.

Una vez establecido que la protección a derechos humanos debe comprender a los derechos de las personas jurídicas, en los casos en que ello sea aplicable, como en la especie, en que el derecho humano vulnerado es el de tutela judicial efectiva; que el tratamiento constitucional de ese derecho no debe ser distinto para personas físicas o jurídicas; y que al estar comprometido en la controversia el mencionado derecho de tutela judicial, es necesario ejercer la facultad de suplir la deficiencia de la queja, consideró debía determinar, con base en el principio hermenéutico conocido como pro persona, la interpretación más favorable que razonablemente cabe asignar a lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que sirvió de fundamento en el recurso de reclamación del que deriva el acto reclamado, para confirmar el desechamiento de la demanda de nulidad promovida por la persona jurídica quejosa.

Así, con apoyo en el principio pro persona, determinó que la interpretación del citado artículo, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva y a la seguridad y certeza jurídicas, debe ser en el sentido de que prevé un supuesto específico para la promoción del juicio contencioso administrativo, en aquellos supuestos en los que se manifieste desconocer el acto que se pretende impugnar, donde debe admitirse la demanda, sin que su presentación, en ese momento, esté sujeta al plazo genérico de quince días contados a partir de la fecha manifestada como de conocimiento de la resolución administrativa que se pretende impugnar, pues así se garantiza el desarrollo total del procedimiento y una adecuada y oportuna defensa frente al acto de autoridad, que se aduce desconocer.

De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente la existencia de la contradicción de criterios, pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo número 647/2012, el seis de diciembre de dos mil doce, es enfático, al sostener que las personas morales no son titulares de derechos humanos y, por ende, quedan excluidas de la protección del artículo 1o. de la Constitución General de la República, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito arriba a una conclusión contraria.

En efecto, el citado tribunal, al resolver el juicio de amparo número **********, el seis de junio de dos mil trece, como premisa para atender a la

litis planteada, estableció que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección, en aquellos supuestos en que ello sea aplicable, con arreglo a la naturaleza de esas personas, al constituir figuras o ficciones jurídicas creadas por el propio sistema jurídico, cuyos derechos y obligaciones se resuelven en los de las personas físicas.

Conclusión la anterior, que le permitió arribar a la diversa, en el sentido de que el tratamiento constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser distinto cuando el titular del derecho humano lo es una persona física que cuando lo es una persona jurídica, si se toma en cuenta que por su contenido es el mismo para ambas clases de personas y que no existen razones objetivas que justifiquen un trato desigual entre ellas, esto es, que la tutela judicial efectiva descansa en el principio de igualdad de todas las personas, tanto físicas como jurídicas, a tener el libre acceso a la jurisdicción del Estado.

En estos términos, el punto de contradicción a resolver estriba en determinar si el artículo 1o. constitucional, al prever que en los Estados Unidos Mexicanos "todas las personas" gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, comprende también a las personas jurídicas y, en consecuencia, si es aplicable el principio pro persona que como imperativo establece el segundo párrafo de la disposición constitucional, en la interpretación de las normas relativas a esos derechos fundamentales de la titularidad de las personas morales.

QUINTO.—**Criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.** El criterio que en concepto de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, es en el sentido de que las personas morales, como entidades a las que el orden jurídico reconoce personalidad jurídica, esto es, la capacidad o aptitud para ser sujetos de derechos y obligaciones, gozan de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, acordes a su naturaleza y que se asumen como fundamentales para la realización de su objeto y fines.

Es un hecho incontrovertible que el orden jurídico reconoce la existencia de las personas morales, jurídicas o colectivas, como asociaciones o entes dotados de personalidad jurídica propia, independiente de la de las personas físicas que las conforman, sujetos de derechos y obligaciones.

El Código Civil Federal, en su libro primero, relativo a las personas, comprende tanto a las personas físicas, como a las morales.

En su artículo 25, dispone que son personas morales:

"I. La nación, los Estados y los Municipios;

"II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;

"III. Las sociedades civiles o mercantiles;

"IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;

"V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;

"VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.

"VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736."

Conforme a esta disposición, se enuncia, en primer término, a las personas morales de derecho público, dentro de las que comprende al Estado mismo, así como a los demás entes públicos a los que la ley les reconoce personalidad, tales como los organismos públicos descentralizados, de acuerdo al artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o los ejidos, en términos del artículo 9o. de la Ley Agraria, por ejemplo.

Señala también a las sociedades civiles y mercantiles, estas últimas reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuyo artículo segundo dispone que aquellas inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de sus socios.

Refiere en la fracción IV a las personas morales de naturaleza laboral, como son los sindicatos que, de conformidad con el artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo, son personas morales con capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles, así como defender sus derechos y ejercer las acciones que correspondan ante todas las autoridades.

Comprende, además, a las sociedades cooperativas y sociedades mutualistas.

Asimismo, a todo tipo de asociaciones, distintas a las mencionadas, que persigan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Aquí cabe citar a los partidos políticos, respecto de los que el artículo 22, apartado 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la Constitución y ese código.

Por último, la fracción VII alude a las personas morales de naturaleza privada que se hayan constituido en el extranjero.

En el numeral 26, el ordenamiento civil federal establece que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, reconociéndoles, además de la capacidad jurídica, atributos tales como domicilio, nombre o denominación, patrimonio y nacionalidad.

Conforme a lo anterior, destaca que el Código Civil Federal reconoce como personas, tanto a las personas físicas como morales, mismas a las que enuncia, acotando su capacidad de ejercicio a aquellos derechos necesarios para la consecución de su objeto, con independencia de lo que, al respecto, dispongan las leyes especiales que las regulen.

Establecido el reconocimiento del orden jurídico a estas asociaciones o entes colectivos, toca ahora examinar si se encuentran comprendidos en el enunciado del artículo 1o. constitucional.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del diez de junio de dos mil once, dispone:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

En su primer párrafo, la norma establece que en los Estados Unidos Mexicanos *todas las personas* gozarán de los *derechos humanos* reconocidos por la propia Ley Fundamental tanto como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías establecidas para su protección.

Si como se ha expuesto, personas son tanto las físicas como las morales a las que el orden jurídico reconoce personalidad jurídica, el planteamiento expuesto pareciera encontrar solución con esta sola aseveración.

Sin embargo, surge un diverso cuestionamiento que se levanta por algunos como una objeción al reconocimiento a la titularidad de derechos humanos por parte de las personas morales, consistente, precisamente, en determinar si los derechos humanos, como propios e inherentes a los seres humanos, son predicables de la persona moral, lo que, en un primer acercamiento, pareciera un contrasentido.

Desde un punto de vista meramente semántico, en efecto, parece desprenderse que no existe correspondencia alguna entre la persona moral y los derechos humanos, en tanto que sólo la persona humana, individualmente considerada puede gozar de tales derechos, por ser consustanciales a su propia naturaleza.

No obstante, el problema trasciende a esta simple dimensión conceptual. De conceder que las personas morales no son titulares de derechos humanos, ello conduce a privar a estos entes de aquellos derechos fundamentales que se reconocen como necesarios para la consecución de sus

fines y de las garantías que para su protección brinda el orden constitucional, simplemente, por ejemplo, no podrían acudir al juicio de amparo para la tutela de sus derechos, lo cual resulta una conclusión inaceptable.

La reforma al artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, trajo consigo el cambio de denominación del título primero, capítulo I, para abandonar el "*De las garantías individuales*", por el "*De los derechos humanos y sus garantías*".

Este cambio de denominación, se ha dicho, trasciende a un mero cambio de nomenclatura, que posee un significado distinto, en tanto implica el reconocimiento constitucional pleno a la denominación y comprensión universal de los derechos básicos de la persona, emanados del respeto a la dignidad del hombre. Es decir, que tuvo como eje central a la persona humana y su dignidad, en un espectro tal que abarca no sólo los que la Ley Fundamental de nuestro país reconoce, sino en la misma dimensión que les asignan los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Sin desconocer tal propósito y extensión, ciertamente no puede dejarse de lado que por el hecho de denominarse y concebirse propiamente como *derechos humanos*, se excluya a la persona moral de su titularidad, más aún cuando es evidente el cúmulo de relaciones jurídicas que entablan como sujetos de derechos y obligaciones, que exige gocen de ciertos derechos que se alzan como fundamentales –no estrictamente derechos humanos, pero sí comprendidos dentro de ellos– para cumplir con los fines que les son propios.

Así lo confirma el proceso legislativo del que emanó la reforma en comento, del que se advierte que la cuestión, si bien no trascendió a los temas centrales del debate parlamentario –quizá por evidente–, no pasó por alto a la consideración del Constituyente Permanente.

Del examen de los documentos atinentes, la única referencia se localiza en el apartado III de consideraciones del dictamen, de fecha ocho de marzo de dos mil once, de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, de la Cámara de Senadores, relativa a la reforma en materia de derechos humanos, en la cual, se señaló textualmente: "*Primera. Respecto al párrafo primero del artículo 1o. constitucional, estas comisiones dictaminadoras estiman conveniente precisar que la incorporación del término 'persona' propuesto desde la Cámara de Origen es adecuado, entendiendo por tal, a todo ser humano titular de iguales derechos y deberes emanados de su común dignidad* **y en los casos en que ello sea aplicable debe ampliarse a las personas jurídicas**."

De lo anterior, la voluntad o entendimiento expreso del Poder Revisor de la Constitución, en el sentido de que el término *persona* debe ampliarse a las personas jurídicas, en los casos en que ello sea aplicable, pues es cierto que no puede significar la comprensión de la totalidad de los derechos humanos de que gozan las personas físicas y que responden a su esencia misma, sino sólo en la dimensión que le es consustancial, abarcando aquellos derechos fundamentales que se ha reiterado resultan necesarios para la realización de sus fines y brindar seguridad jurídica en el tráfico de las múltiples relaciones de esta índole en las que intervienen.

Bajo este tenor, no debe pasar desapercibido el propio texto de la Ley Fundamental que en diversos de sus preceptos reconoce derechos a favor de las personas morales.

En este rubro, se cita el artículo 25 que, en lo conducente, dispone:

"Artículo 25. …

"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

"La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución."

El artículo 27, cuyo párrafo sexto, en lo que interesa, señala que: "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes."

La misma disposición constitucional, en el párrafo noveno, prescribe:

"Artículo 27. …

"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

"I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

"El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

"II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria.

"III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria.

"IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.

"En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor

extensión que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.

"La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción.

"V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo.

"VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. …"

Cabe la cita también de los artículos 35, fracción II, 41, base I y 99 de la Constitución General de la República, en tanto confieren derechos a los partidos políticos, entidades que ya se ha dicho gozan de personalidad jurídica.

El artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la Ley Fundamental, que confiere tanto a obreros como a empresarios el derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.

De igual forma, el artículo 130 constitucional, que expresamente confiere a las iglesias y agrupaciones religiosas personalidad jurídica, previo el registro correspondiente.

Las disposiciones antes citadas denotan que la Constitución Federal, lejos de desconocer a las personas morales, emanadas en su mayoría del derecho de asociación que tutela el artículo 9o., les confiere pleno reconocimiento y en los casos mencionados derechos expresos.

En ese sentido, este Tribunal Pleno encuentra que deben aplicarse a la persona jurídica aquellos derechos fundamentales que resulten necesarios

para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad.

En tales términos, las personas jurídicas no gozan de los derechos humanos que presupongan características intrínsecas o naturales del hombre, en cuanto ficciones creadas a partir del ordenamiento jurídico, sino como organización creada a partir de la agrupación voluntaria de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad común y con una identidad propia y diferenciada que trasciende la de los individuos que la integran, a la que el ordenamiento jurídico atribuye personalidad y, consecuentemente, reconoce capacidad para actuar en el tráfico jurídico, como sujeto independiente de derechos y obligaciones, son titulares de aquellos derechos que inscritos en el rubro de derechos humanos, comprenden los que se constituyen en fundamentales para la consecución de sus fines.

Así, por ejemplo, serán aplicables únicamente para los individuos los derechos vinculados con la dignidad del hombre, la integridad física, la vida y la protección de la familia; mientras que podrán hacerse extensivos a las personas jurídicas privadas, los derechos que garantizan una protección económica o que comportan garantías de acceso a la jurisdicción, entre otros.

Cabe destacar que el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver en sesión de treinta de mayo de dos mil trece la contradicción de tesis 56/2011, que si bien no tuvo por materia dilucidar sobre la titularidad de derechos fundamentales de las personas morales, como premisa previa a la solución de la contradicción ahí planteada, apuntó que cuando el artículo 1o. de la Constitución alude a persona se entiende, de principio, referido al ser humano, precisamente como sujeto de quien se predica el reconocimiento de derechos humanos, esto es, inherentes a la condición humana y su dignidad intrínseca, lo que, sin duda, no puede atribuirse a las personas jurídicas colectivas, ello no significa que éstas no gocen del reconocimiento y, por ende, la garantía de su protección, de ciertos derechos fundamentales.

Lo anterior, porque, en primer lugar, dicho precepto constitucional no distingue expresamente entre persona natural y persona jurídica; en segundo lugar, como se ha aceptado en derecho comparado, las personas morales sí gozan de la protección de ciertos derechos fundamentales, ya sea porque se trata de asociaciones de personas físicas o porque éstas necesariamente las representan y, por ende, no aceptar que aquéllas son titulares de derechos fundamentales negaría a los individuos que las conforman la protección de sus propios derechos; o en razón de que, constitucional y legalmente, las personas morales son titulares de derechos y obligaciones y/o deberes que, indefectible-

mente, se traducen en el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, que protejan su existencia y permitan el libre desarrollo de su actividad, como el de propiedad, de asociación, de petición, de acceso a la justicia, etcétera. Es decir, las personas colectivas tienen por sí mismas, la titularidad de determinados derechos, más allá de las personas que las conforman.

De ahí que, sostuvo, el vocablo *persona* a que alude el artículo 1o. constitucional debe interpretarse en sentido amplio, esto es, que en principio su protección alcanza también a las personas jurídicas colectivas.

En la misma ejecutoria también que precisó que la titularidad de los derechos fundamentales, tratándose de las personas morales dependerá de la propia naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o especialidad de dicha persona jurídica, lo que sólo podrá determinarse en cada caso concreto, pues no es posible que, de manera general, se resuelva en forma tajante y sin duda alguna sobre todos los derechos fundamentales, cuya titularidad también podría expandirse a las personas morales.

Esto, en tanto que existen determinados derechos que, por su naturaleza, sólo corresponden a la persona humana y, de ningún modo, a las jurídicas (derecho a la libertad personal, a una familia, a la integridad física, a la salud o a la libertad de tránsito). Otros, de los cuales puede advertirse su titularidad por parte de las personas jurídicas, en razón de su naturaleza, como son los derechos fundamentales de propiedad, de acceso a la justicia, de legalidad, de audiencia, de petición y de asociación, entre otros. En cambio, otros más, respecto de los que no es sencillo resolver si son atribuibles o no a las personas jurídicas, pues más allá de la naturaleza del derecho, tal interpretación, en muchas ocasiones, dependerá de la forma en que se entienda al mismo, es decir, en tanto se fije su alcance y/o límites.

Las consideraciones expuestas se recogen en la tesis aislada con el rubro y texto siguientes:

"PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE.—Si bien el vocablo 'persona' contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, el juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, si un derecho les corresponde o no pues, si bien

existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros que, evidentemente, corresponden sólo a las personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana como son los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física; pero además, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que, más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad ideológica."[2]

De ahí que es de concluir que el artículo 1o. de la Constitución Federal, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos *todas las personas* gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que en ella se establece, comprende tanto a las personas físicas como jurídicas, las que gozarán de ellos, tanto como de las garantías para su protección, en la medida en que comprendan derechos fundamentales que, acorde a su naturaleza, resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger su existencia, identidad y asegurar el libre desarrollo de su actividad.

En consecuencia, cabe afirmar que el imperativo que establece el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, es aplicable respecto de las normas relativas a esos derechos fundamentales de los que gocen las personas jurídicas, en razón de lo que deberán aplicarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia.

La interpretación anterior se ve robustecida si atendemos a lo que disponen los párrafos segundo y tercero de la norma constitucional en comento, en la medida en que la interpretación que se propone, en relación con su primer enunciado, extiende el reconocimiento a las personas morales como titulares de derechos de orden fundamental que, conforme a su naturaleza, resultan necesarios para la consecución de sus fines, y de los instrumentos tendentes a garantizar su eficacia y protección. Esto es, una interpretación conforme al principio pro persona.

---

[2] Décima Época. Registro digital: 2005521. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: aislada. Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, materia constitucional, tesis P. I/2014 (10a.), página 273.

Por otra parte, la señalada interpretación resulta también conforme al principio de progresividad, pues reconocido, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación, al amparo del texto anterior del artículo 1o. de la Ley Fundamental, que las personas morales gozaban de lo que entonces recibía el nombre de *garantías individuales*, constituiría una regresión el sostener una interpretación contraria, atendiendo no a la denominación, sino al contenido mismo de tales garantías, ello, sin desconocer el espíritu que orientó la reforma constitucional en la materia.

En mérito de lo hasta aquí considerado, el criterio que en concepto de este Alto Tribunal debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 225 de la Ley de Amparo, es el siguiente:

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. EL artículo 1o. de la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutarlo por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve

PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis denunciada entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del último considerando de la presente resolución.

Notifíquese;

Así, lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Respecto del punto resolutivo primero:

Se aprobó por mayoría de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza, respecto del considerando primero, relativo a la competencia. El Ministro Cossío Díaz votó en contra.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza, respecto de los considerandos segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la legitimación de quien promueve, a los criterios materia de la contradicción y a la determinación de la existencia de la contradicción de criterios.

Respecto del punto resolutivo segundo:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Franco González Salas, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza, respecto del considerando quinto, relativo al criterio que debe prevalecer. Los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea y Valls Hernández reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. El Ministro Franco González Salas anunció voto concurrente.

El Ministro presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, en la inteligencia de que la redacción definitiva de la tesis derivada de esta resolución, cuyo texto debe incluirse en la sentencia correspondiente, una vez aprobado el engrose respectivo, se someterá al procedimiento administrativo que regularmente se sigue ante el Comité de Aprobación de Tesis, en términos de lo previsto en el artículo 14 del Acuerdo General Plenario Número 20/2013.

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil

siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: El título y subtítulo a que se alude al inicio de esta ejecutoria, corresponden a la tesis P./J. 1/2015 (10a.), que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 16, Tomo I, página 117.

Las tesis de jurisprudencia y aisladas 2a./J. 99/2006, 2a./J. 219/2007, 1a. XXVI/2012 (10a.), 1a. XIX/2011 (10a.) y IV.2o.A.6 K (10a.) citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 345 y Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 151 y Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2918 y Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 2074, respectivamente.

La tesis aislada P. I/2014 (10a.) citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas.

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitivi-

dad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.

P./J. 6/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 38/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo en Materia Civil del Segundo Circuito. 26 de enero de 2015. Unanimidad de diez votos de los Ministros

---

Nota: (*) Las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J. 17/2003 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, página 6, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", Tomo XVIII, julio de 2003, página 10, con el rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y Tomo XVIII, julio de 2003, página 15, con el rubro: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO.", respectivamente.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, apartándose de algunas consideraciones, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, apartándose de algunas consideraciones. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 648/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 725/2013.

De las sentencias que recayeron al amparo directo 684/2013, resuelto por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y al amparo directo 725/2013, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, derivaron las tesis aisladas I.11o.C.13 K (10a.) y II.2o.C.4 K (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE ENCUENTRA SUJETA A LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYAN SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, CONTRA LAS QUE YA NO PROCEDA RECURSO ORDINARIO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS (ALCANCES DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO A) Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y 37 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN)." y "SENTENCIA DEFINITIVA EN LA NUEVA LEY DE AMPARO. PARA DETERMINAR LA VÍA DE SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO Y LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ÉSTA, ES INNECESARIO ANALIZAR SI SE AGOTÓ O NO EL RECURSO PROCEDENTE, PUES LA LEGISLACIÓN VIGENTE SÓLO LO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.", publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas y del viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas, así como en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2175 y Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3222, respectivamente.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número 6/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Subsección 5.

EJECUTORIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE CONTIENEN CRITERIOS VINCULATORIOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, EN SU CASO, LAS TESIS RESPECTIVAS

AFIRMATIVA FICTA. EL ARTÍCULO 108-BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23965/LIX/12, PUBLICADO EL 31 DE MARZO DE 2012 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, Y CORREGIDO POR LA FE DE ERRATAS IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DPL-845-LIX, PUBLICADA EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 10 DE MAYO DE 2012, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ: "EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD DE DECLARATORIA ANTE CUALQUIER SALA DEL PODER JUDICIAL QUE CONOZCA DE LA MATERIA CIVIL O MERCANTIL...", NO VULNERA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES, EN TANTO QUE DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO SE REFIERE A QUE EL GOBERNADOR DECIDA LA SALA QUE HA DE CONOCER DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, SI NO MÁS BIEN QUE CUALQUIERA DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE JALISCO QUE CONOZCAN DE DICHAS MATERIAS ES COMPETENTE PARA RESOLVER LAS SOLICITUDES DE AFIRMATIVA FICTA, CONFORME A LOS MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS QUE RIJAN EN ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ DE LA FE DE ERRATAS RELATIVA AL DECRETO NÚMERO 23965/LIX/12, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 31 DE MARZO DE 2012, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO

DPL-869-LIX, PUBLICADA EN ESE MEDIO DE DIFUSIÓN EL 5 DE JUNIO DE 2012, ÚNICAMENTE POR LO QUE HACE A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, EN TANTO QUE A TRAVÉS DE ELLA SE REALIZARON MODIFICACIONES AL CONTENIDO NORMATIVO DE LA CITADA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDEN A LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR EXPRESADA AL DISCUTIR Y APROBAR EL DICTAMEN SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 101, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23965/LIX/12, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 31 DE MARZO DE 2012, EN RELACIÓN CON SU PÁRRAFO PRIMERO, CUYO TEXTO FUE CORREGIDO POR LA FE DE ERRATAS RESPECTIVA A ESE DECRETO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DPL-869-LIX, PUBLICADA EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 5 DE JUNIO DE 2012, AL PREVER QUE LOS JUZGADOS DEL RAMO CIVIL LOCALES CONOCERÁN DE LAS DEMANDAS DE AFIRMATIVA FICTA PARA ACTOS DE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO, ASÍ COMO DE TODA CLASE DE JUICIOS O TRÁMITES QUE DETERMINE EL CONSEJO GENERAL DENTRO DE SUS FACULTADES, ES VÁLIDO. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 23965/LIX/12, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 108-BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO ESTATAL, ADICIONADO POR ESE DECRETO, AMBOS CORREGIDOS POR LAS FE DE ERRATAS IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS DPL-869-LIX Y DPL-845-LIX, PUBLICADAS EN DICHO MEDIO DE DIFUSIÓN EL 5 DE JUNIO Y 10 DE MAYO DE 2012, RESPECTIVAMENTE, EN LAS PORCIONES

NORMATIVAS QUE PREVÉN "LAS SALAS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA CIVIL Y MERCANTIL..." Y "...LAS SALAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO QUE CONOZCAN DE LA MATERIA CIVIL Y MERCANTIL...", CORRELATIVAMENTE, NO GENERAN INCERTIDUMBRE, EN TANTO QUE DEBE ENTENDERSE QUE SE REFIEREN A LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA LOCAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2012. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 20 DE OCTUBRE DE 2014. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: TANIA MARÍA HERRERA RÍOS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día **veinte de octubre de dos mil catorce**.

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

1. PRIMERO. Por oficio presentado el once de mayo de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de esa entidad, promovió controversia constitucional en contra del Decreto Número 23965/LIX/12, publicado con fecha treinta y uno de marzo de dos mil doce en el Periódico Oficial del Estado, expedido y promulgado, respectivamente, por el Congreso y el gobernador, ambos de la propia entidad, por medio del cual "Se abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, se expide la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, se adiciona una fracción al artículo 108 y agrega un 108-Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y se adiciona una fracción y modifica la fracción V del artículo 48 y modifica el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco."

2. SEGUNDO.—La parte actora citó como preceptos violados los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló que no existe tercero interesado; y narró los siguientes antecedentes:

"Primero. Por medio del decreto que por esta vía se impugna, o sea el Número 23965/LIX/12, y con el objetivo de 'fomentar el desarrollo económico, la productividad y mejorar la competitividad' así como de promover 'inversiones productivas y la creación, expansión y consolidación de empresas' que 'contribuyan al crecimiento económico, al desarrollo sustentable y a la generación de empleos en la entidad', se crearon dos nuevos ordenamientos jurídicos, la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del propio Estado.

"Segundo. A través de ese mismo decreto, y atendiendo a uno de los aspectos que contemplan los marcos normativos de los ordenamientos recién creados, se reformaron las leyes orgánicas tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial de la referida entidad federativa, a efecto de instaurar en ellas un nuevo procedimiento, relativo al trámite de las iniciativas elevadas a la consideración del Congreso jalisciense que involucren la enajenación o actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles que integran al patrimonio de la propia entidad –cuyo fin sea precisamente la cumplimentación de los proyectos productivos regulados por las leyes antes aludidas– dotando al Ejecutivo Local de la facultad para solicitar ante 'las Salas del Poder Judicial del Estado' la declaratoria de la afirmativa ficta, para el caso de que las iniciativas de referencia no hayan sido desahogadas por el mencionado Congreso en los plazos establecidos legalmente; y

"Tercero. En virtud de que las reformas contenidas en el decreto en cuestión conculcan diversos principios consagrados en la Carta Magna, el que esto suscribe promueve la presente controversia con la representación con que comparezco, en reparación de tal transgresión."

3. TERCERO.—El demandante expresó, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:

4. - Que con las normas contenidas en el decreto combatido se incorporó al sistema jurídico jalisciense, la posibilidad de someter a consideración del Congreso Estatal iniciativas que involucren actos traslativos de dominio, con respecto de bienes inmuebles propiedad del Estado, determinándose asimismo el proceso exacto a que habría de ceñirse el citado Congreso al dar el debido trámite a esas iniciativas.

5. - Que para el caso de que el Legislativo Local no desahogare el trámite referido dentro de los plazos establecidos al efecto, se estatuyó que la correspondiente iniciativa se entenderá aprobada bajo el concepto de la afirmativa ficta.

6. - Que el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo jalisciense, desarrolla el procedimiento, por medio del cual, el titular del Poder

Ejecutivo de dicha entidad puede solicitar ante cualquier Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil, la declaratoria de la afirmativa ficta que, dado el caso, ha operado en relación con las referidas iniciativas, reglamentándose igualmente el proceso sumario que la correspondiente Sala deberá llevar a cabo al dar trámite a la demanda del gobernador.

7. - Que como consecuencia del procedimiento introducido a la normatividad orgánica que se comenta, fue necesario establecer en la diversa Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado las facultades correspondientes a dicho Poder, para estar en aptitud de desahogar legalmente el referido proceso novedoso, modificándose el artículo 48 –contenido en el capítulo IV, intitulado "De las Salas del Supremo Tribunal de Justicia", del título segundo de tal norma– en su fracción V, para dar cabida a la atribución de las apuntadas Salas en lo tocante a las demandas de afirmativa ficta, y también fue modificado el diverso dispositivo 101 de la misma legislación –localizado en el capítulo I, denominado, "De la competencia y organización de los Juzgados de Primera Instancia", del título quinto de dicha ley–, estableciéndose a través de la nueva redacción de esa norma que, las Salas del Poder Judicial conocerán asuntos de materias Penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo General, enlistándose entre los casos sujetos a su potestad las referidas demandas de afirmativa ficta.

8. - Que el recientemente creado artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, estatuye la competencia de "las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil", para resolver las mencionadas demandas de afirmativa ficta que haga valer el Ejecutivo Estatal, haciéndose igualmente continua referencia a través de las fracciones del numeral anotado, a la forma y términos en que la "Sala del Poder Judicial" que conozca del asunto las desahogará; y el reformado artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local igualmente dota a las "Salas del Poder Judicial" de la facultad para conocer de los asuntos de que se trata.

9. - Que de la Constitución Local y del resto de las disposiciones que la reglamentan, en especial de los artículos 56, 58 y 67 de la Constitución de la entidad, así como 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se desprende que tanto el Supremo Tribunal de Justicia como el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco funcionan en Pleno y en Salas, mientras que el Tribunal Electoral de la entidad ejerce su jurisdicción funcionando en Pleno y durante su periodo de receso realiza sus funciones a través de la Sala Permanente, en virtud de lo cual, los tres tribunales que forman parte del Poder Judicial estatal llevan a cabo sus funciones actuando en Pleno o en Salas.

10. - Que en virtud de lo anterior, el concepto de "Salas del Poder Judicial" a que se hace alusión en las reformas introducidas por medio del decreto

combatido, bien puede incluir indistintamente a cualquiera de las que componen a los tribunales referidos, por lo cual, la asignación de competencias efectuada por el Congreso jalisciense resulta imprecisa; indefinición que trae como consecuencia que se surta la competencia para conocer de los asuntos de que se trata en favor de cualquiera de las Salas que componen a los tribunales jaliscienses, trastocando de este modo el esquema organizacional del Poder Judicial Estatal que se prevé en la Constitución de la entidad, provocando a su vez una violación al principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

11. - Que el nuevo dispositivo 108-Bis, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, prevé la posibilidad de que el titular del Ejecutivo Local pueda presentar la solicitud de declaratoria de afirmativa ficta ante cualquier Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil, o sea ante la Sala que sea de su elección, lo que trae como consecuencia que, con independencia de los sistemas de distribución de asuntos que se hallen instituidos en los mencionados tribunales, el citado servidor público pueda decidir libremente incoar la demanda de afirmativa ficta ante la Sala específica de su elección, lo que deviene, además, en una infracción al principio de división de poderes, pues la independencia y autonomía del Poder Judicial se dejan en entredicho al sujetar la actuación de un órgano jurisdiccional en particular al arbitrio del gobernador, y no en función de los mecanismos de distribución de asuntos ya diseñados para asegurar, en la medida de lo posible, una impartición de justicia rápida e imparcial.

12. - Que el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, hace alusión a las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil, mientras que el dispositivo 101 de la normatividad organizacional del Poder Judicial Local otorga facultad a las Salas del Poder Judicial del ramo civil para conocer de los referidos casos de afirmativa ficta, y concede al "Pleno del Consejo General" –a pesar que desde el mes de enero del año dos mil siete al órgano administrativo en cuestión se le denominó Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco– la facultad para determinar la materia de que conocerán precisamente las citadas Salas del Poder Judicial, pudiendo ser "penal, civil, familiar y mercantil", por lo que a través del Decreto Legislativo que se reclama, el Congreso Estatal atribuyó al Consejo de la Judicatura del Estado la aptitud de determinar las materias de que conocerán las "Salas del Poder Judicial", con independencia del tribunal al que pertenezcan, acentuándose de esta manera el vicio antes descrito, en perjuicio de la organización del propio Poder Judicial.

13. - Que todo lo anterior confirma la imprecisión competencial de las "Salas del Poder Judicial" provocada por el decreto impugnado, en detrimento

del marco organizativo del Poder Judicial Local, pues con motivo de tal decreto se desdibuja la exacta previsión de la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales aludidos, relegando la definición de aquélla al órgano de administración del Poder de mérito.

14. - Que el nuevo texto del numeral 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco dota de una facultad novedosa al Consejo de la Judicatura de la entidad, consistente en la potestad de determinar la materia de los asuntos de los que conocerán las "Salas del Poder Judicial", lo que constituye una infracción al sistema jurídico impuesto por la Constitución, Local, vulnerándose la autonomía e independencia del propio Poder Judicial de Jalisco, tomando en cuenta que conforme a los artículos 57, 62, 65 y 68 de dicha Constitución, corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinar la competencia de las Salas que lo integran, al Tribunal de lo Administrativo le compete resolver los asuntos en materias administrativa y fiscal, y al Tribunal Electoral dirimir las controversias derivadas de los procesos electorales estatales, así como de los procedimientos de plebiscito y referéndum; sin que entre las facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco por el artículo 64 de la Constitución Local se encuentre la determinación de las materias de los asuntos de que conocerán las "Salas del Poder Judicial", pues ni siquiera las funciones de administración, vigilancia y disciplina de que tal ente se encarga al interior del Poder Judicial, comprenden al Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de lo Administrativo y Tribunal Electoral.

15. - En apoyo a sus argumentos la parte actora invoca las tesis de rubros: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL ARTÍCULO 312 DEL CÓDIGO ELECTORAL ESTATAL QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN POR EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, PARA EL CASO DE QUE EL CONGRESO DE LA ENTIDAD NO RESUELVA SOBRE EL PARTICULAR EN EL PLAZO AHÍ SEÑALADO, SE APARTA DE LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, TRANSGREDE EL DIVERSO 16 DE LA LEY FUNDAMENTAL.", "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN II, Y 38, PRIMER PÁRRAFO, ÚLTIMA PARTE, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIGNACIÓN, SE OPONEN A LA CONSTITUCIÓN LOCAL, POR LO QUE TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR

CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE."

16. - Que el decreto cuya invalidez se demanda infringe igualmente la autonomía e independencia del Poder Judicial actor, resguardadas por los artículos 17 y 116, fracción III, de la Constitución Federal, trastocándose con ello al orden constitucional que garantiza el principio de división de poderes en la esfera de las entidades federativas.

17. - Que la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales, consagradas por la Constitución Federal, prevén como una de las condiciones para que en efecto se verifiquen tales notas características, la potestad exclusiva del Supremo Tribunal de Justicia para determinar el funcionamiento, integración y administración de sus Salas; debiéndose hacer extensivo tal argumento, por identidad de razón, al resto de los tribunales que integran a dicho Poder; en virtud de lo cual, si el modelo en que se inserta al Consejo de la Judicatura Estatal transgrede las ideas fundamentales referidas anteriormente, debe reputarse inconstitucional el diseño de tal órgano de administración del Poder Judicial de la entidad.

18. - Que si conforme a los artículos 56, 57, 62, 64, 65 y 68 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se dota de verdadera autonomía al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo y al Tribunal Electoral, garantizando que el Consejo de la Judicatura Local no pueda válidamente inmiscuirse en el funcionamiento y administración de esos órganos jurisdiccionales, entonces la posibilidad de que sea el Consejo de la Judicatura el que determine la materia de los casos de los que se ocuparán las "Salas del Poder Judicial", resulta incompatible con el marco legal de referencia, pues supondría un sometimiento de dichos tribunales a la decisión del órgano administrativo de mérito, en cuanto al funcionamiento, integración y administración de aquellos tribunales.

19. - Que no es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia sea a su vez el del Consejo de la Judicatura del Estado, pues de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Local, el órgano de administración de que se trata, está integrado en su mayoría por consejeros de origen ciudadano, seleccionados por el Congreso del Estado.

20. - Que ningún miembro titular del Consejo de la Judicatura, a excepción de su presidente –sólo en lo tocante al Tribunal Superior–, conoce de manera

directa o tiene aptitud de imponerse de los datos fácticos, estadísticos o demás pertinentes, referentes al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo o al Tribunal Electoral, que le permita tomar una decisión adecuada, en armonía con la eficiencia y efectividad buscada en la impartición de la justicia en territorio jalisciense, en cuanto a la determinación de las materias que las "Salas del Poder Judicial" habrán de conocer.

21. - Que no es obstáculo que las funciones de que se trata hayan de ser ejercidas materialmente por el Consejo de la Judicatura del Estado, el cual pertenece al propio poder actor, pues este Tribunal Pleno en las controversias constitucionales 32/2007 y 25/2008 determinó que, si bien el Consejo de la Judicatura Estatal, al ser parte del propio Poder Judicial de la entidad, no podría propiamente afectar la esfera de competencia del Tribunal Superior de Justicia, pues a la luz del principio de división de poderes, ambos se ubican en la misma esfera competencial, no siendo lógicamente posible que se generen conflictos inter poder, lo cierto es que, había situaciones en que se podría configurar una violación al artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, si al llevar a cabo sus funciones administrativas tal consejo llega a afectar alguna de las garantías de la función jurisdiccional, y concluyó que los Consejos de la Judicatura pueden ejercer libremente sus facultades administrativas, siempre respetando todas y cada una de las garantías constitucionales de la función jurisdiccional, pero jamás podrán, desde el punto de vista normativo, ubicarse por encima de los órganos propiamente jurisdiccionales.

22. - Que en las referidas controversias se determinó que, si con motivo de la distribución de funciones establecida por el legislador, se provoca un deficiente o incorrecto desempeño de uno de los Poderes del Estado, tal situación afecta el principio de división de poderes, que encuentra su justificación en la idea de que el fraccionamiento de las atribuciones generales del Estado se instituye precisamente para hacer efectivas las facultades de cada uno de ellos.

23. - Invoca las tesis derivadas de la controversia constitucional 32/2007, de rubros: "CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE LOCAL PARA SU INTEGRACIÓN, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES.", "CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SUS FUNCIONES ESTÁN SUBORDINADAS A LA PROPIAMENTE JURISDICCIONAL.", así como "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN."; y agrega que los argumentos de que se trata deben hacerse

extensivos, por identidad jurídica e igualdad de razón, al inciso b) de la fracción II del numeral 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

24. - Que los lineamentos básicos que rigen a los juzgados de la entidad –incluyéndose en dicha acepción a los de primera instancia, menores y de paz–, se hallan contenidos en los numerales 63 y 64 de la Constitución Política de la entidad, de acuerdo con los cuales, los juzgados estatales conocerán de los asuntos que determine el Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en la legislación organizativa que al efecto se expida, esto es, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, motivo por el cual, el artículo 101 de este ordenamiento, antes de la reforma combatida, estipulaba el contenido de cada una de las materias sobre las cuales habrían de ejercer su jurisdicción los juzgados jaliscienses, siendo ese artículo, el único que prevé, en todo el sistema jurídico estatal, lo relativo a ese tópico, de manera que el numeral de que se trata, constituía el sustento legal, en virtud del cual, cada uno de los Jueces del Estado resolvía los asuntos de las materias ahí descritas, mientras que el Consejo de la Judicatura Local, en ejercicio de las facultades administrativas de que goza, distribuía y asignaba las materias sobre las que cada uno de los distintos juzgados de la entidad podría emitir válidamente pronunciamientos.

25. - Que el equilibrio fundamental reseñado en el párrafo que antecede, se borró de un plumazo con motivo de la actuación de las demandadas, en razón de que se eliminó de la citada norma la descripción o especificación de los asuntos que por materia habrán de conocer los juzgados del Estado; que al sustituirse la expresión "Los juzgados de la entidad" por la relativa a "Las Salas del Poder Judicial", se desterró del ordenamiento jurídico jalisciense el sustento legal, en virtud del cual, los Jueces estatales emiten sus pronunciamientos en las distintas materias sobre las que ejercen su jurisdicción, con lo que se provocó un vacío en el marco normativo estatal, puesto que ahora ni la Constitución Política jalisciense ni la ley que la reglamenta en materia de impartición de justicia, contienen previsión alguna en lo tocante al contenido de las materias sobre las cuales los juzgadores locales pueden emitir válidamente sus resoluciones.

26. - Que la situación descrita acarrea dos consecuencias: a) que los juzgados estatales resuelvan de determinada clase de asuntos sin que legalmente tengan dicha atribución, violentando diariamente las garantías de legalidad y seguridad jurídica, además de que, conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura Local tiene la potestad de fijar el número y competencia de aquéllos "de conformidad con lo que establezca la ley", con lo que ciñe a la legislatura a determinar en la ley secundaria la manera

en que se fijará el número y competencia de los juzgados para que con base en lo anterior, el Consejo de la Judicatura proceda a realizar la asignación de competencias a los distintos juzgadores jaliscienses, y el legislador local, en vez de cumplir con ese mandato, asigna injustificadamente competencias a las "Salas del Poder Judicial" y por medio del mismo acto, elimina la descripción de los asuntos de que podrán conocer los Jueces de la entidad, trastocando con ello a la jerarquía normativa que debe imperar en el Estado, lo que implica una violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna; b) que si el principio de división de poderes que debe imperar en los Estados se resguarda efectivamente mediante el aseguramiento del ejercicio independiente y autónomo de la función jurisdiccional, al no contar el sistema jurídico jalisciense con el cauce legal respectivo, a través del cual, se ejercerá la facultad de decisión judicial de mérito por parte de los juzgados del Poder Judicial, por no estar previsto el contenido de las materias sobre las que válidamente ejercerán los juzgados su respectiva jurisdicción, es indudable que no se puede hablar de que se haya conseguido el pleno acatamiento del principio constitucional de mérito, pues la actividad decisoria carente de regulación no puede considerarse como autónoma e independiente.

27. - Que si el Congreso del Estado tiene la obligación fundamental de diseñar en la entidad federativa un marco constitucional y legal que garantice el ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional, con miras a preservar el principio de división de poderes, entonces la ausencia de un conducto jurídico que ciña de manera exacta la actividad de los juzgados jaliscienses, provoca un vacío en dicho andamiaje, en el cual la función jurisdiccional se efectúa al margen de la ley que supuestamente debe reglamentarlo, lo que impide la consecución de tales notas requeridas para considerarse respetado el principio de división de poderes.

28. CUARTO.—Mediante proveído de once de mayo de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente y remitirlo al Ministro Luis María Aguilar Morales, a quien correspondió actuar como instructor del procedimiento.

29. El quince de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados y emplazó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco y ordenó dar vista a la procuradora general de la República.

30. QUINTO.—Por parte del Poder Legislativo del Estado de Jalisco comparecieron el presidente y secretarios del Congreso de la entidad, quienes dieron contestación a la demanda mediante promoción presentada en la ofi-

cina de correos de la localidad el veintiocho de junio de dos mil doce, recibido en esta Suprema Corte el dos de julio siguiente, manifestando, en lo que interesa, lo siguiente:

31. - Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no existe la norma materia de la presente controversia como la señala el actor, pues si bien combate el texto que fue enviado al titular del Poder Ejecutivo de la entidad para su publicación, posteriormente a ello, el Poder Legislativo Local remitió tres fe de erratas que fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el cinco de junio y diez de mayo de dos mil doce, de las que se observa que, el texto que pretende impugnarse es inexistente, pues debe de atenderse al realmente aprobado por el Poder Legislativo. Al respecto invoca lo sostenido, en relación con las fe de erratas, en la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 721/2008, resuelto por la Segunda Sala de esta Suprema Corte el cuatro de noviembre de dos mil nueve.

32. - Que es infundado que con la reforma al artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se permita al Consejo de la Judicatura determinar los asuntos que conocerán las Salas del Poder Judicial, pues dicha disposición preceptúa que los juzgados de la entidad conocerán de los asuntos de materias penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo de la Judicatura; y también es errado que se haya provocado un vacío en la normatividad local, en cuanto a la supuesta ausencia de previsiones respecto a las materias sobre las cuales los juzgadores locales puedan emitir sus resoluciones, pues el Poder Judicial actor hace señalamientos sobre una norma inexistente, sin tomar en cuenta la norma aprobada por esa Legislatura Estatal.

33. - Que la norma referida, además, se ajusta a los principios estatuidos tanto en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, como en los preceptos que en la materia se contienen en la Constitución Política Local.

34. - Que el Alto Tribunal ha sostenido que cada entidad federativa, en ejercicio de su soberanía, puede establecer el funcionamiento y la organización de sus instituciones públicas, en virtud de lo cual, los Estados gozan de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento del Poder Judicial, lo que implica una amplia libertad de configuración de sus sistemas de nombramiento y ratificación, siempre y cuando éstos respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la independencia judicial. Al efecto, invoca lo que señaló esta Suprema Corte en la controversia constitucional 25/2008 en relación con

los Consejos de la Judicatura Estatales y la función jurisdiccional, consideraciones de las cuales, según sostiene, deriva que en el caso que nos ocupa no se trastocan los principios de dicha función, pues no se encuentra subordinada.

35. - Que si la norma que pretende el actor que se invalide continúa en el mismo sentido, estableciendo las materias que deben conocer los juzgados de la entidad, bajo la distribución asignada por el Consejo de la Judicatura en ejercicio de las facultades administrativas de las que goza, entonces los señalamientos del Poder Judicial actor son inoperantes.

36. - Que es igualmente inoperante la impugnación que pretende el actor del artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ya que aun y cuando dicho precepto disponga que en el procedimiento de la declaratoria de procedencia para la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, deba tramitarse ante cualquier Sala del Poder Judicial, lo cierto es que, también precisa que debe ser ante la que conozca de la materia civil o mercantil, de manera que es inadmisible considerar que dicha competencia pueda recaer en cualquiera de las Salas de los tribunales que integran al Poder Judicial en la entidad, para lo cual, debe de tomarse en cuenta que las únicas Salas que conocen de las materias civil y mercantil son las del Supremo Tribunal de Justicia.

37. - Que, tomando en cuenta el principio estatuido en el artículo 17 constitucional de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, así como el postulado establecido en el artículo 116, fracción III, de dicho ordenamiento político, los poderes de los Estados se organizarán conforme a sus respectivas Constituciones y sus Poderes Judiciales se ejercerán por los tribunales que establezcan dichas Constituciones.

38. - Que los artículos 52 y 56 de la Constitución Política del Estado de Jalisco disponen que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, disponiendo que el ejercicio del Poder Judicial en esa entidad se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados, y que se compone además por dos órganos, el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado.

39. - Que la fracción I del artículo 62 de la Constitución Local establece que, al Supremo Tribunal de Justicia le corresponde conocer de todas las con-

troversias jurisdiccionales del orden penal, civil, de lo familiar y mercantil; mientras que el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial de la entidad, en términos del artículo 65, tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquéllas, con los particulares, así como las que surjan entre dos o más de las entidades públicas citadas.

40. - Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, tiene a su cargo la resolución de toda controversia que se suscite con motivo de los procesos electorales para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de los órganos de gobierno municipales, y en cuanto a la realización de los procesos de plebiscito y referéndum, siendo el órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias en materia electoral, lo que se apoya en lo estatuido en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política Jalisciense.

41. - Que la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad establece, en el artículo 3o., que dicho poder se ejerce por: el Supremo Tribunal de Justicia; el Tribunal Electoral; el Tribunal de lo Administrativo; los Juzgados de Primera Instancia, Especializados y Mixtos; los Juzgados Menores; los Juzgados de Paz y el Jurado Popular. Además, contará con dos órganos: Consejo de la Judicatura del Estado y un Instituto de Justicia Alternativa del Estado.

42. - Que así, en términos del título segundo denominado "Del Supremo Tribunal de Justicia", en su capítulo IV, llamado "De las Salas del Supremo Tribunal de Justicia", en concreto el artículo 48, dispone lo referente a las Salas que conozcan de las materias civil y mercantil, que son las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, todo lo cual hace infundados los señalamientos del Poder Judicial actor.

43. SEXTO.—Mediante escrito presentado en la oficina de correos de la localidad el veintiséis de junio de dos mil doce, recibido en este Alto Tribunal el dos de julio siguiente, Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en representación del Poder Judicial de esa entidad, presentó ampliación de demanda, en la que impugnó, del Congreso Local, la fe de erratas número DPL-869-LIX, publicada en el Periódico Oficial del Estado el cinco de junio de dos mil doce, relativa al decreto impugnado. En la referida promoción citó como preceptos violados los artículos 14, 16, 17 y 116 constitucionales, señaló que no existe tercero interesado y planteó, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez:

44. - Que con la fe de erratas combatida se violan los artículos 14, 16, 17 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

45. - Que conforme a la regulación legal que en el Estado de Jalisco prevé la figura jurídica de la fe de erratas, específicamente el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, es dable concluir que la fe de erratas, es el mecanismo por medio del cual, se pueden corregir las diferencias que se verifiquen entre lo exactamente aprobado por la asamblea y lo publicado ulteriormente.

46. - Que en el caso esto no sucedió, pues del artículo quinto de la minuta del Decreto Número 23965/LIX/12, aprobada por la Asamblea Legislativa Local, remitida a través del oficio número DPL-773-LIX de veinticuatro de enero de dos mil doce al Gobernador Constitucional del Estado, para su publicación, que constituye un hecho notorio por encontrarse publicada en la página de Internet oficial de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, se advierte que coincide con lo que efectivamente se difundió en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" del día treinta y uno de marzo del año dos mil doce, en relación con los artículos 48 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco; en virtud de lo cual, no se actualiza el supuesto de la fe de erratas, cuya procedencia consiste en que la publicación contenga disposiciones distintas a lo exactamente aprobado por la asamblea, en virtud de lo cual, no resulta legalmente permisible que a través de una fe de erratas se altere lo puntualmente aprobado por el Congreso.

47. - Que si el contenido de la minuta en cuestión es idéntico al de la publicación llevada a cabo en el Periódico Oficial Estatal, tal ausencia de discrepancia impide la procedencia de una fe de erratas, que tiende a modificar el texto legal aprobado por la asamblea, con lo que se evidencia que la modificación realizada en la fe de erratas materia de esta ampliación, no puede válidamente llevarse a cabo a través de esa figura jurídica.

48. - Que con dicha fe de erratas se modificó el texto de lo efectivamente expedido con anterioridad por el Congreso del Estado de Jalisco, por lo que dicho acto materialmente está reformando normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, sin que en la especie se hubiese verificado el procedimiento legislativo ordinario estatuido constitucional y legalmente para tal efecto, en virtud de lo cual es ilegal. Al efecto, invoca las tesis que llevan los siguientes rubros: "PREDIAL. LA FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, NO TRASCIENDE A LA VALIDEZ DE LAS NORMAS QUE CONTIENE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).", "RENTA. LA OMISIÓN DE PUBLICAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO DE EXPEDICIÓN DE LA LEY QUE REGULA ESE IMPUESTO, NO IMPIDE SU VIGENCIA, PUES SE SUBSANÓ CON LA FE DE ERRATAS (DIARIOS OFICIALES

DE LA FEDERACIÓN DEL 1o. Y 24 DE ENERO DE 2002, RESPECTIVAMENTE)." y "FE DE ERRATAS AL DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 245 BIS DEL ABROGADO CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PUBLICADO EL 25 DE FEBRERO DE 2004. AL DIFERIR DEL TEXTO ORIGINALMENTE APROBADO POR EL LEGISLADOR LOCAL, SIN AGOTAR LAS ETAPAS RELATIVAS PARA SU CREACIÓN, MODIFICACIÓN O REFORMA, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL."

49. - Que teniendo en cuenta lo anterior, la fe de erratas significa una infracción al principio de división de poderes protegido por la Ley Fundamental, y en consecuencia a la autonomía e independencia del poder actor, por cuanto a que el Legislativo está en realidad modificando el texto exacto introducido por la reciente reforma de que fue objeto la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a través de una fe de erratas, mecanismo que no es el idóneo para ello, por lo cual, el Legislativo Local está incidiendo en el funcionamiento del Poder Judicial Estatal por medio de un acto ilegal, en contravención de la normatividad que ciñe y encauza específicamente al proceso de la creación y modificación de leyes, el cual funciona precisamente como garante del ya mencionado principio de división de poderes.

50. - Que en el escrito de demanda inicial se adujo, entre otras cosas, que como consecuencia de la emisión de la reforma contenida en el Decreto Número 23965/LIX/12, se eliminó la competencia legal de los juzgados de la entidad, lo cual implicaba todas las violaciones e irregularidades puntualizadas en el referido escrito inicial; y que si bien no pasa desapercibido que por medio de la fe de erratas materia de la ampliación, específicamente en el artículo 101, se restablece la competencia de los juzgados jaliscienses, lo cierto es que tal restitución se efectuó por conducto de un mecanismo que no es el idóneo para tal fin, por lo cual no puede tener los efectos y alcances de que injustificadamente se le pretende dotar, pues resulta ilegal que la competencia de los mencionados juzgados locales descanse en una previsión legal dictada de manera contraria al marco normativo de Jalisco y, consecuentemente, infractora de los principios estatuidos en la Ley Fundamental.

51. - Que la competencia de los juzgados que conforman al Poder actor no puede recaer en una norma endeble, emitida de forma ilegal, cuya validez no resistiría examen constitucional alguno.

52. - Que con el objetivo de restablecer el orden fundamental en el Estado de Jalisco, resulta indispensable reincorporar en la legislación orgánica del Poder Judicial Local la competencia legal de los juzgados, pero por medio de la vía exactamente prevista para tales efectos por el orden jurídico de la entidad.

53. SÉPTIMO.—El cuatro de julio de dos mil doce, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda por parte del Legislativo Local, de la cual dio vista a la procuradora general de la República y a la parte actora. Asimismo, admitió a trámite la ampliación de demanda, teniendo por demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales, a los que ordenó se emplazara, y dio vista a la procuradora general de la República.

54. OCTAVO.—Por parte del Ejecutivo Local compareció el gobernador del Estado de Jalisco, quien en su contestación de demanda, presentada en la oficina de correos de la localidad el primero de julio de dos mil doce, recibida el once del mismo mes y año, dijo, en lo que interesa, lo siguiente:

55. - Que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando el Poder Judicial del Estado de Jalisco refiere que la norma cuya invalidez se demanda es el Decreto Número 23965/LIX/12, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende puntualmente que, no es dicho decreto legislativo en su totalidad la materia de impugnación, sino solamente la reforma y adición de los artículos 48 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existen dichas disposiciones.

56. - Que lo anterior se sostiene, en virtud de que el contenido normativo aducido por el Poder Judicial actor, respecto de los artículos reclamados, no se corresponde con el texto efectivamente aprobado por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, colaboradores en el sistema legislativo local, ya que el Poder Judicial sustenta su impugnación con base en la publicación del Decreto Número 23965/LIX/12 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día treinta y uno de marzo de dos mil doce, en su sección V, número 29, siendo que el pasado cinco de junio de dos mil doce fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", tomo CCCLXXIII, sección II, No. 7, dos "fe de erratas" relativas al Decreto Número 23965/LIX/12 supracitado, ambas dictadas por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, conforme a las cuales, el texto de las disposiciones normativas combatidas por el Poder Judicial impetrante, resulta evidentemente discrepante respecto de lo publicado conforme a las fe de erratas supracitadas.

57. - Que, por tanto, conforme a la literalidad de los artículos de referencia contenidos en la fe de erratas señalada, resulta materialmente imposible sostener que efectivamente el texto normativo impugnado por el Poder Judicial del Estado prevalezca efectivamente en la realidad jurídica en los mismos términos en que fue considerado por el Poder impetrante al accionar el pre-

sente medio de control constitucional, y en consecuencia, al demostrarse que la disposición legal jurídica impugnada no existe en los términos aducidos por el reclamante, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.

58. - Que el Decreto Número 23965/LIX/12 impugnado, no ha entrado en vigor, en tanto que de su artículo primero transitorio se observa claramente que dicha normatividad entrará en vigencia a partir del primero de enero de dos mil trece, razón por la cual debe desecharse la demanda de plano, conforme al artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción VIII, y 21, fracción II, en atención a que si bien el decreto materia de la presente controversia ya fue publicado, no ha entrado en vigor y, por tanto, no ha causado agravio o invasión alguna al ámbito competencial del Poder Judicial reclamante; máxime si se considera que después de la publicación de la fe de erratas supracitada, el texto normativo combatido por el Poder Judicial ya no existe ni mucho menos, entrará en vigor.

59. Por auto de doce de julio de dos mil doce el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda por parte del Ejecutivo Local, de la cual dio vista a la procuradora general de la República y a la parte actora.

60. NOVENO.—El presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco dieron contestación a la ampliación de demanda, mediante promoción presentada en la oficina de correos de la localidad el veinticuatro de agosto de dos mil doce, recibida en esta Suprema Corte el seis de septiembre de ese año, en la cual señalaron, básicamente, lo que a continuación se resume:

61. - Que es cierto el acto que se reclama en la contestación, pues en relación con el Decreto Número 23965/LIX/12 se emitieron las fe de erratas números DPL-845-LIX, DPL-867-LIX y DPL-869-LIX.

62. - Que no es como erróneamente se indica, que se hayan modificado los artículos 48 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sino que en términos del artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, los secretarios de la mesa directiva elaboraron y firmaron la fe de erratas DPL-869-LIX y la enviaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su correspondiente publicación, ya que la publicación del Decreto Número 23965/LIX/12 fue distinta a lo exactamente aprobado por la Asamblea Legislativa.

63. - Que los argumentos propuestos por el Poder Judicial actor en su ampliación de demanda en el sentido de que, por lo que hace a los artículos 48 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a su juicio,

lo aprobado por la asamblea y lo publicado es lo mismo, de manera que no se surte la hipótesis legal de la fe de erratas, y no era posible realizar la modificación que se hizo, deben declararse infundados, considerando las constancias fotostáticas certificadas que obran agregadas en autos y lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

64. - Que respecto a la publicación del Decreto Número 23965/LIX/12 de treinta y uno de marzo de dos mil doce, ese Poder público se percató que no coincidía con lo exactamente aprobado por la Asamblea Legislativa, según podrá observarse del contenido del dictamen con modificaciones aprobado en segunda lectura por el Pleno en la sesión del veinticuatro de enero de dos mil doce; en virtud de lo cual, los diputados secretarios elaboraron y remitieron para su correspondiente publicación, la fe de erratas que aquí se impugna, y que resulta ser la que expresa y contiene la voluntad de la Asamblea Legislativa, y que está contenida en el dictamen con modificaciones que abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, que expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, que adiciona una fracción al artículo 108 y agrega un artículo 108-Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y que adiciona una fracción y modifica la fracción V del artículo 48 y modifica el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

65. - Que resultan aplicables al caso, como señalaron en la contestación de demanda inicial, los razonamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 721/2008.

66. El Ministro instructor tuvo por contestada la ampliación de demanda, por parte del legislativo de la entidad, mediante auto de siete de septiembre de dos mil doce, dando vista a la parte actora y a la procuradora general de la República.

67. DÉCIMO.—Por su parte, el gobernador del Estado de Jalisco contestó la ampliación de demanda mediante escrito presentado en la oficina de correos de la localidad el cinco de septiembre de dos mil doce, recibida el once del mismo mes y año, en la que señaló, en esencia, lo siguiente:

68. - Que respecto a la figura legal de "fe de erratas" prevista en la legislación jalisciense, debe observarse lo dispuesto por los artículos 25 y 27 de la Ley del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", así como 208 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, conforme a los cuales, la fe de erratas es un mecanismo mediante el cual el Congreso del Estado, en su carácter de creador de la norma legal y en conocimiento directo del contenido normativo

aprobado, observa que existe una diferencia entre lo efectivamente autorizado por el Pleno del Congreso y el documento enviado para su publicación al Poder Ejecutivo, por lo que dicho error trasciende a la publicación primigenia y el Poder Legislativo debe enviar la fe de erratas correspondiente a fin de que el texto realmente aprobado sea publicado oportunamente en el mismo medio de publicación oficial y, de esta forma, se cumpla con los principios de publicidad y certeza jurídica respecto de la legislación vigente en el Estado.

69. - Que resulta ilustrativa la tesis aislada P. VI/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "LEY PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE SU TEXTO DEBE ATENDERSE AL APROBADO POR LAS CÁMARAS DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO Y NO AL QUE DIFIRIENDO DE ÉSTE SE HAYA ENVIADO AL EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.", porque las fe de erratas tienen como objetivo la defensa del texto normativo efectivamente aprobado por el legislador ordinario mediante la corrección de la errata contenida en la publicación oficial de la norma general creada, en tanto dicha publicación difiere de lo expresamente aprobado por el legislador.

70. - Que la fe de erratas fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el cinco de junio de dos mil doce, en su tomo CCCLXXIII, sección II, No. 7, conforme al procedimiento que para tal efecto disponen la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y la ley del referido órgano de difusión oficial, cumpliendo los requisitos legales para su publicación y, en consecuencia, dicha publicación es legal, pues fue preparada por el Poder Legislativo y remitida a ese Poder Ejecutivo mediante una comunicación oficial suscrita por los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y, una vez recibida, fue ordenada su publicación en el medio de difusión oficial supraindicado, hechos mediante los cuales se observa incontrovertiblemente el cumplimiento de las disposiciones normativas referidas.

71. - Que la redacción correctamente aprobada por el Pleno del Congreso del Estado y publicada mediante la fe de erratas mencionada, es congruente con el objeto de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, e incluso, el texto normativo de la fe de erratas resulta congruente con la exigencia del actor en la presente controversia, en el sentido en el que aduce debe estar redactada dicha norma orgánica, por lo que al carecer de agravio alguno debe "desecharse por infundada" la ampliación de demanda.

72. Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil doce, el Ministro instructor tuvo por contestada la ampliación de demanda por parte del Poder Ejecutivo Local, de la que ordenó dar vista a la parte actora y a la procuradora general de la República.

73. DÉCIMO PRIMERO.—Por su parte, la procuradora general de la República emitió su opinión en el sentido de que procede, por una parte, declarar la invalidez de la fe de erratas combatida y, por la otra, reconocer la validez de los artículos 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco.

74. DÉCIMO SEGUNDO.—Agotado en sus términos el trámite respectivo, el dieciséis de octubre de dos mil doce tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, además, se tuvo por presentada la opinión de la procuradora general de la República.

CONSIDERANDO:

75. PRIMERO.—Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año; en virtud de que se plantea un conflicto entre dos poderes de un Estado, en el que se impugnan normas de carácter general.

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando primero, párrafo 75.

76. SEGUNDO.—Antes de analizar la legitimación de las partes, resulta conveniente precisar las normas y actos objeto de la presente controversia.[1]

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando segundo, párrafos 76 al 79.

77. Del estudio integral de la demanda se advierte que, la parte actora impugnó el Decreto Número 23965/LIX/12 publicado el treinta y uno de marzo de dos mil doce en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", específicamente por lo que hace al artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 48, fracción V, y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad.

---

[1] El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados."

78. Posteriormente amplió la demanda combatiendo la fe de erratas relativa al citado decreto, identificada con el número DPL-869-LIX, acto que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de junio de dos mil doce.

79. En esa medida, deben tenerse como normas y actos objeto de la presente controversia, respectivamente, los preceptos y la fe de erratas referidos.

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando tercero, párrafos 80 al 87.

80. TERCERO.—La parte actora tiene legitimación para promover la presente controversia constitucional.

81. De conformidad con los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[2] tendrá el carácter de actor en las controversias constitucionales la entidad, poder u órgano promovente, quien podrá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en los términos de las normas que lo rigen, esté facultado para representarlo.

82. La demanda de controversia constitucional,[3] promovida a nombre del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se encuentra suscrita por el Magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, según acredita con copia certificada del acta de la sesión plenaria extraordinaria celebrada por los integrantes del Supremo Tribunal aludido el quince de diciembre de dos mil diez, de la que se desprende que se declaró electo para asumir la presidencia del Supremo Tribunal del primero de enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y se le tomó la protesta correspondiente.

83. La ampliación de demanda[4] fue suscrita por el mismo funcionario.

---

[2] "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

[3] Presentada el once de mayo de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte.

[4] Presentada el veintiséis de junio de dos mil doce en la oficina de correos de la localidad.

84. El artículo 56 de la Constitución Política del Estado de Jalisco[5] establece que, la representación del Poder Judicial de la entidad recae en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

85. Adicionalmente, el artículo 34, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad[6] dispone que es facultad del presidente del Supremo Tribunal de Justicia representar al Poder Judicial del Estado en los actos jurídicos y oficiales.

86. Así, la legislación del Estado de Jalisco confiere expresamente la representación del Poder Judicial Local al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.

87. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la siguiente jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL, ÓRGANO INTEGRANTE DEL PODER JUDICIAL LOCAL.—Del artículo 57, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Baja California, se advierte que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad es el representante del Poder Judicial Local; luego, conforme al artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene legitimación activa para promover la vía de controversia constitucional en defensa de los intereses del Poder citado y de los órganos que lo integran, entre los que se encuentra el Tribunal de Justicia Electoral, pues conforme con los artículos 2o., fracción VI, y 244, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, este tribunal es parte de ese poder." (Núm. Registro digital: 175117, Novena Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, mayo de dos mil seis, página 1377, jurisprudencia P./J. 66/2006).

---

[5] "Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los Juzgados de Primera Instancia, menores y de paz y jurados. Se compondrá además por dos órganos, el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado.
"La representación del Poder Judicial recae en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el cual será electo, de entre sus miembros, por el Pleno. El presidente desempeñará su función por un periodo de dos años y podrá ser reelecto para el periodo inmediato."

[6] "Artículo 34. Son facultades del presidente del Supremo Tribunal de Justicia:
"I. Representar al Poder Judicial del Estado en los actos jurídicos y oficiales; …"

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando cuarto, párrafos 88 al 96.

88. CUARTO.—A continuación se analiza la legitimación de los demandados.

89. De conformidad con los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[7] en las controversias constitucionales tendrán el carácter de demandados, las entidades, poderes u órganos que hayan emitido y promulgado las normas generales o actos impugnados, quienes podrán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen estén facultados para representarlos.

90. En representación del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, suscribieron la contestación de demanda, así como la contestación a su ampliación, los diputados Sergio Armando Chávez Dávalos, Noa Zurizadai Acosta Esquivias y Verónica Rizo López, en su carácter de presidente y secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, personalidad que acreditan con la copia certificada del Acuerdo Legislativo 1475/LIX/12 de treinta de mayo de dos mil doce, mediante el cual se modifica la integración de la referida mesa directiva para el periodo comprendido entre el uno de junio y el treinta de septiembre de dos mil doce, del cual se desprende su elección en los cargos de que se trata.

91. El artículo 35, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,[8] establece que corresponde a la mesa directi-

---

[7] "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: ...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

[8] "Artículo 35. 1. Son atribuciones de la mesa directiva:
"...
"V. Representar jurídicamente al Poder Legislativo del Estado, a través de su presidente y dos secretarios, en todos los procedimientos jurisdiccionales en que éste sea parte, ejercitando de manera enunciativa más no limitativa todas las acciones, defensas y recursos necesarios en los juicios: civiles, penales, administrativos, mercantiles o electorales, así como los relativos a los medios de control constitucional en todas sus etapas procesales, rindiendo informes previos y justificados, incluyendo los recursos que señala la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la demás legislación aplicable en la materia, y con las más amplias facultades para pleitos y cobranzas para toda clase de bienes y asuntos e intereses de este poder, en la defensa de sus derechos que la ley le confiere en el ámbito de sus atribuciones. La mesa directiva puede delegar dicha representación de forma general o especial."

va, a través de su presidente y dos secretarios, representar jurídicamente al Poder Legislativo en los medios de control constitucional en todas sus etapas procesales; de lo que se colige que, los diputados que suscribieron la contestación de demanda, así como la contestación a su ampliación, en su carácter de presidente y secretarias, respectivamente, de la mesa directiva del Congreso Local, cuentan con facultades para representar al Poder Legislativo demandado.

92. Además, a dicho órgano se le imputa la expedición del decreto impugnado, así como la emisión de la fe de erratas que también se combate; aunado a que es un órgano de los contemplados en el artículo 105 constitucional para intervenir como tal en las controversias constitucionales. En esa medida, el citado Congreso tiene legitimación pasiva en el presente asunto.

93. Por el Poder Ejecutivo del Estado compareció, dando contestación a la demanda y a su ampliación, Emilio González Márquez, en su carácter de gobernador del Estado de Jalisco, calidad que acredita con copia certificada de la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" de veintiocho de febrero de dos mil siete, de la declaratoria de gobernador electo, así como copia certificada del acta de la sesión solemne verificada por el Congreso Local el uno de marzo de dos mil siete, de las que se desprende que se le declaró como gobernador electo del Estado de Jalisco para el periodo comprendido del primero de marzo de dos mil siete al veintiocho de febrero de dos mil trece, así como la toma de protesta correspondiente..

94. El artículo 2o., párrafo primero, de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco[9] dispone que dicho Poder se confiere a un ciudadano que se denomina gobernador del Estado, quien lo ejerce exclusivamente.

95. Por tanto, si el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco se deposita en el gobernador, es evidente que éste se encuentra legitimado para intervenir en la presente controversia en representación de aquél.

96. Al referido Poder se le imputa la promulgación y publicación del decreto impugnado y de la fe de erratas combatida; aunado a que es uno de los Poderes contemplados en el artículo 105 de la Constitución General de la República para intervenir en las controversias constitucionales. En esa medida, tiene legitimación pasiva en el presente asunto.

---

[9] "Artículo 2o. El Poder Ejecutivo se confiere a un ciudadano que se denomina gobernador del Estado, quien lo ejerce exclusivamente.
"El gobernador del Estado, para el ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como para el debido cumplimiento de sus obligaciones, se auxilia de la administración pública del Estado."

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando quinto, párrafo 97.

97. QUINTO.—Marisela Morales Ibáñez acreditó su carácter de procuradora general de la República con la copia certificada de su nombramiento. De acuerdo con lo previsto en el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procurador general de la República tiene el carácter de parte en las controversias constitucionales.

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando sexto, párrafos 98 al 101.

98. SEXTO.—La existencia del Decreto Número 23965/LIX/12, en que se contienen las disposiciones impugnadas –artículos 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 48, fracción V y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad–, así como de la fe de erratas relativa a dicho decreto, identificada con el número DPL-869-LIX, se acredita con las publicaciones correspondientes en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", de fechas treinta y uno de marzo y cinco de junio de dos mil doce, respectivamente.

99. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de esta Segunda Sala, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN."[10]

100. No es óbice para llegar a la conclusión anterior lo sostenido por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, en el sentido de que no existen las normas materia de la presente controversia, porque, señalan, el contenido de los preceptos combatidos actualmente no corresponde al impugnado por el actor, debido a que, con posterioridad a la publicación del Decreto Número 23965/LIX/12, el Poder Legislativo Local remitió tres fe de erratas que fueron publicadas en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el diez de mayo y cinco de junio de dos mil doce, de las que se observa que el texto que pretende impugnarse es

[10] Tesis 2a./J. 65/2000, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, cuyo texto es el siguiente: "Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo."

inexistente, por lo que los artículos impugnados no existen en los términos aducidos por el actor, debiendo atenderse al texto realmente aprobado por el Poder Legislativo, por lo que se actualiza, a juicio de los Poderes demandados, la causal prevista por la fracción III del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[11] –el Poder Legislativo Local considera aplicable, además, la fracción VIII del artículo 19 de ese ordenamiento.–[12]

101. En efecto, el hecho de que en relación con el Decreto Número 23965/LIX/12 se haya publicado una fe de erratas con fecha diez de mayo de dos mil doce, y otras dos con fecha cinco de junio del mismo año, de ninguna manera implica que puedan tenerse por inexistentes las normas combatidas, pues, como se señaló con anterioridad, su existencia se acredita con la publicación oficial que de ellas fue llevada a cabo el treinta y uno de marzo de dos mil doce, y el hecho de que el texto haya sido corregido con posterioridad, no implica que no existan las normas sino que, en su caso, se atienda al texto que efectivamente corresponda; lo que, además, será en todo caso materia del fondo del asunto, pues el actor, entre otras cuestiones, controvierte la validez de la única fe de erratas en la que se realizan cambios sustanciales a las normas combatidas,[13] identificada con el número DPL-869-LIX.[14]

102. SÉPTIMO.—Procede analizar en este momento la oportunidad de la demanda de controversia constitucional, así como de su ampliación.

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando séptimo, párrafos 102 al 107.

---

[11] "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: …
"III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último; y"

[12] "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: …
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

[13] A través de la fe de erratas identificada con el número DPL-867-LIX, publicada también el cinco de junio de dos mil doce, se reforman preceptos del Decreto Número 23965/LIX/12 diversos a los impugnados en la presente controversia constitucional.
En cuanto a la fe de erratas publicada el diez de mayo de dos mil doce, identificada con el número DPL-845-LIX, no se realizan correcciones esenciales, pues en el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco sólo se cambia en dos partes el artículo "el" por el artículo "la", mientras que en el numeral 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad simplemente se hace referencia a las fracciones IV y V que no fueron objeto de modificación, poniendo puntos suspensivos a continuación del número romano.

[14] Cabe apuntar que en esta última, además, sólo se modifican los artículos 48 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y no así el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

103. Al respecto, el artículo 21, fracciones I y II, de la Ley Reglamentaria de la Fracción I del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y …"

104. Por su parte, el artículo 3o. del mismo ordenamiento establece lo siguiente:

"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

"II. Se contarán sólo los días hábiles, y

"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

105. La demanda de controversia constitucional promovida en contra del Decreto Número 23965/LIX/12 se presentó en tiempo, tomando en cuenta que éste fue publicado en el Periódico Oficial de Jalisco el treinta y uno de marzo de dos mil doce, en virtud de lo cual, el plazo de treinta días hábiles para tal efecto transcurrió del dos de abril al diecisiete de mayo de ese año, teniendo en cuenta que fueron inhábiles los días cuatro, cinco, seis, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de abril, así como uno, cinco, seis, doce y trece de mayo de dos mil doce, en términos de los artículos 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo Número 2/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de treinta de enero de dos mil seis, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso. En esa medida, si la demanda se presentó el once de mayo de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, su promoción fue oportuna.

106. Por lo que hace a la ampliación de demanda, su presentación también es oportuna, en virtud de que la fe de erratas en ella combatida, identificada con el número DPL-869-LIX, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el cinco de junio de dos mil doce, en virtud de lo cual, el plazo de treinta días hábiles para tal efecto transcurrió del seis de junio siguiente al dos de agosto del mismo año, tomando en consideración que fueron inhábiles los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de junio, así como uno, siete, ocho y del catorce al treinta y uno de julio de dos mil doce. Por tanto, si la ampliación se presentó en la oficina de correos de la localidad el veintiséis de junio de dos mil doce, su presentación fue oportuna.

107. Cobra aplicación en la especie la jurisprudencia de este Tribunal Pleno P./J. 17/2002, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).—El artículo 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de los plazos legales. Ahora bien, del análisis del precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y por finalidad que

las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia." (Novena Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XV, abril de dos mil dos, página 898, Núm. Registro digital: 187268)

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando octavo, párrafos 108 al 117.

108. OCTAVO.—Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia planteadas por las partes.

109. Cabe recordar que las relativas a la inexistencia de las normas combatidas ya fueron objeto de estudio con anterioridad.

110. Ante todo, resulta pertinente aclarar que si bien el primer párrafo del artículo 101 combatido fue reformado mediante el Decreto Número 24861/LX/14, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el once de abril de dos mil catorce, después de haber sido objeto de discusiones y modificaciones,[15] esto no conlleva a considerar que cesaron sus efectos, pues el artículo primero transitorio del decreto referido[16] dispone que éste entrará en vigor de conformidad con la declaratoria de incorporación prevista por el artículo segundo transitorio de la reforma a la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.

111. Al respecto, el Congreso Local realizó la declaratoria de incorporación del sistema procesal penal acusatorio mediante Decreto Número

[15] **Originalmente se proponía el siguiente texto:** "Artículo 101. Los juzgados de la entidad conocerán de los asuntos de materia penal, civil, familiar, mercantil, de lo correspondiente a los juzgados de control en materia penal, de juicio oral en materia penal, de ejecución de penas, especializados en adolescentes según determine el Pleno del Consejo General, conforme a las reglas siguientes.—I a V …"
Posteriormente se determinó modificar dicho párrafo, así como la fracción I, incisos a), b) y c); y luego sustituir lo relativo a "Consejo General" por de la "Consejo de la Judicatura".

[16] "Primero. El presente decreto entrará en vigor de conformidad con la declaratoria de incorporación prevista por el artículo segundo transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, previa su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Jalisco'."

24864/LX/14 publicado el once de abril de dos mil catorce, en cuyo artículo primero[17] se precisa que los derechos y garantías que consagra el artículo 20 constitucional, empezarán a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procesos penales de manera progresiva en los diversos Municipios del Estado, con fechas uno de octubre de dos mil catorce, así como quince de enero, veintinueve de mayo, veinticuatro de agosto y treinta de noviembre, todos de dos mil quince, y quince de enero y cinco de febrero de dos mil dieciséis.

112. En esa medida, en el Estado de Jalisco las normas relativas al sistema penal acusatorio serán aplicables gradualmente en los diversos

---

[17] "Artículo primero. Se declara incorporado al orden jurídico del Estado de Jalisco, el Sistema Penal Acusatorio consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual entrará en vigor para todos los delitos previstos por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco y la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en los Municipios del Estado, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, y en consecuencia, los derechos y las garantías que consagra dicha Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se sustanciarán los procedimientos penales:
"I. 1 de octubre de 2014: Amacueca, Atemajac de Brizuela, Jilotlán de Dolores, Gómez Farías, San Gabriel, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Tecalitlán, Tamazula de Gordiano, Tonila, Tuxpan, Zacoalco de Torres, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán el Grande, Pihuamo, Santa María del Oro, Quitupan, Atoyac.
"II. 15 de enero de 2015: Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Tomatlán, San Sebastián del Oeste, Mascota.
"III. 29 de mayo de 2015: Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe, Yahualica de González Gallo, San Ignacio Cerro Gordo, Ixtlahuacán del Río, Cuquio.
"IV. 29 de mayo de 2015: Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo.
"V. 24 de agosto de 2015: Autlán de Navarro, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, Juchitlán, Tecolotlán, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula, Cuautla, Ayutla.
"VI. 24 de agosto de 2015: Atenguillo, Atengo, Ameca, Guachinango, Cocula, Mixtlán, San Martín Hidalgo, Talpa de Allende, Tenamaxtlán.
"VII. 24 de agosto de 2015: Ahualulco de Mercado, Amatitán, Tala, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Tequila, Etzatlán, San Cristóbal de la Barranca, Magdalena, San Marcos, Teuchitlán, Hostotipaquillo.
"VIII. 30 de noviembre de 2015: Atotonilco el Alto, Ayotlán, Zapotlán del Rey, Degollado, Jamay, Tototlán, La Barca, Ocotlán, Poncitlán.
"IX. 30 de noviembre de 2015: Concepción de Buenos Aires, El Salto, La Manzanilla de la Paz, Ixtlahuacán de los Membrillos, Mazamitla, Chapala, Juanacatlán, Jocotepec, Teocuitatlán de Corona, Valle de Juárez, Tizapán el Alto, Tuxcueca, Acatlán de Juárez, Villa Corona.
"X. 15 de enero de 2016: Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.
"XI. 15 de enero de 2016: Villa Purificación, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta.
"XII. 5 de febrero de 2016: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Zapotlanejo."

Municipios de la entidad, en las fechas y términos establecidas en el decreto antes referido; lo que implica, que las normas reformadas mediante el Decreto Número 24861/LX/14 combatido, seguirán teniendo vigencia en los distintos municipios mientras no entre en vigor el sistema procesal penal acusatorio en relación con ellos.

113. Ahora bien, adicionalmente el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco sostiene que es improcedente la demanda de controversia constitucional, conforme a los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II y 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia,[18] en atención a que el decreto materia de la presente controversia no había entrado en vigor, en tanto que de su artículo primero transitorio se observa claramente que dicha normatividad entrará en vigencia a partir del primero de enero de dos mil trece y, por tanto, no causa agravio o invasión alguna al ámbito competencial del Poder Judicial reclamante.

114. La causal de improcedencia antes resumida es de desestimarse, en virtud de que el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el inicio del plazo para promover una controversia constitucional, tratándose de normas generales, a partir de la publicación de éstas y no de su entrada en vigor; de lo que se colige que la fecha de entrada en vigor de las normas combatidas es irrelevante para su impugnación.

115. Cobra aplicación al caso la siguiente jurisprudencia:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA NO HAYA ENTRADO EN VIGOR, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de controversias constitucionales, el plazo para la interposición de la demanda,

---

[18] "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: …
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."
"Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ...
"II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será: ...
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

cuando se impugnen normas generales, será de treinta días contados a partir del siguiente al de su publicación o de aquel en que se produzca el primer acto de aplicación; por tanto, para efectos de la procedencia de esta vía constitucional, resulta irrelevante la circunstancia de que la norma general cuya invalidez se demanda haya entrado o no en vigor." (Novena Época. Núm. Registro digital: 188008, Pleno, jurisprudencia P./J. 147/2001, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XV, enero de dos mil dos, página 919)

116. Además, si las normas impugnadas provocan o no una afectación en el ámbito competencial del Poder Judicial actor, es una cuestión relativa al fondo del asunto, por lo que de ninguna manera puede analizarse para determinar si la controversia es improcedente.[19]

117. Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento diversa a las analizadas, se procede al estudio del fondo del asunto.

118. NOVENO.—Antes de analizar los conceptos de invalidez planteados, resulta pertinente hacer una relación de los antecedentes que se desprenden de las constancias de autos.

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando noveno, párrafos 118 al 129.

119. Con fecha diez de junio de dos mil diez, el diputado José Antonio de la Torre Bravo presentó ante el Congreso del Estado de Jalisco iniciativa del decreto que reforma la fracción XXI y se adiciona la fracción XXV del artículo 2, se reforma la fracción IV del artículo 3, se reforma la fracción VIII del artículo 4, se adicionan las fracciones VIII y IX, al tiempo que se cambia el orden de numeración de la actual fracción VII para quedar como fracción X del artículo 8, se adicionan los artículos 18 Bis, 18 Ter y 18 Quáter, se adiciona la fracción XXI al artículo 21, se reforma la

[19] Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 92/99 del Pleno de esta Suprema Corte, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, página 710, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.—En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas."

fracción XVII del artículo 26, se reforma el artículo 27, se reforma la fracción VIII del artículo 35, se reforma el artículo 38 y se adiciona la fracción V al artículo 62, todos de la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, y se adiciona una fracción al artículo 108, para ocupar el ordinal IV a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; iniciativa que fue dictaminada en enero de dos mil once por las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y de Desarrollo Económico.[20]

120. El veintitrés de septiembre de dos mil diez, la diputada Rocío Corona Nakamura presentó ante el Congreso Local iniciativa de decreto que adiciona la fracción XII y recorre en su orden a las demás, del artículo 4 de la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y de Desarrollo Económico.[21]

121. Con fecha veintiuno de octubre de dos mil diez, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Congreso de Jalisco la iniciativa correspondiente a un nuevo ordenamiento, denominado Ley de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, y se abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, iniciativa que fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y de Desarrollo Económico.[22]

122. Con fecha dieciocho de enero de dos mil once, se aprobó un acuerdo interno que solicitaba al Pleno del Congreso la acumulación legislativa y la realización de foros de consulta pública respecto de iniciativas relacionadas con la modificación, reforma e incluso abrogación de la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco y la creación de la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco; acuerdo que, se dice, fue aprobado por el Congreso de la entidad en sesión posterior. En relación con dichas iniciativas, se hizo una propuesta de dictamen que fue autorizada en sesión extraordinaria de veinticuatro de marzo siguiente, con base en el cual se emitió convocatoria para realizar los citados foros.[23]

123. En sesión celebrada el quince de enero de dos mil doce, se sometió a consideración del Congreso del Estado el punto 5.10 relativo al Acuerdo

[20] Obra en copia certificada a fojas 422 a 474 de autos.
[21] Obra en copia certificada a fojas 415 a 421 de autos.
[22] Obra en copia certificada a fojas 363 a 414 de autos.
[23] Relatado en el dictamen de veinticuatro de enero de dos mil doce, foja 586 del expediente.

Legislativo por el que se acumula el dictamen que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Fomento Económico del Estado con el dictamen de las comisiones conjuntas de Desarrollo Económico, la Especial para la Reforma Integral para la Competitividad y el Desarrollo del Estado de Jalisco, y la de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, que propone la abrogación de la Ley para el Fomento Económico, la creación de las Leyes de Desarrollo Económico y para la Promoción de la Inversión, así como la adición de la fracción IV al artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y las modificaciones a la fracción VI del artículo 23, párrafo primero; del artículo 33, la fracción XIX del artículo 33-Bis y la fracción IV del noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; acuerdo que fue retirado de la discusión y aprobado en votación económica. En dicha sesión también se aprobó la dispensa a la primera lectura del dictamen marcado con el número 6.5, del decreto que abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, y modifica la fracción VI del artículo 23, el párrafo primero del artículo 33, la fracción XIX del artículo 33-Bis y la fracción IV del noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, dispensa que se aprobó en votación económica, y asimismo se fijó para su segunda lectura y discusión el día veinticuatro de enero de dos mil doce.[24]

124. Mediante oficio de veinte de enero de dos mil doce, el secretario general del Congreso de Jalisco informó al gobernador de la entidad, que había dado primera lectura al "Dictamen de decreto por el que se abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, y modifica la fracción VI del artículo 23, el párrafo primero del artículo 33, la fracción XIX del artículo 33-Bis y la fracción IV del noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco"; y que se había fijado para su segunda lectura, discusión y aprobación, en su caso, la segunda sesión ordinaria a celebrarse el veinticuatro de los mismos mes y año.[25]

125. En relación con las iniciativas referidas a la modificación, reforma e incluso abrogación de la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco y la creación de la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico, Especial para la Reforma Integral para la Competitividad y el Desarrollo del Estado de Jalisco, y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, con fecha veinticuatro

[24] Obra en copia certificada a fojas 704 a 727 de autos; en lo que interesa fojas 719 a 721.
[25] Obra en copia certificada a foja 701 de autos.

de enero de dos mil doce, formularon "Dictamen con modificaciones que abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, que expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, que adiciona una fracción al artículo 108 y agrega un 108-Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y que adiciona una fracción y modifica la fracción V del artículo 48 y modifica el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco."[26]

126. En sesión de veinticuatro de enero de dos mil doce se aprobó, con veintinueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen de "Decreto 5.5 con modificaciones". En dicho punto se hizo alusión al "5.5 Dictamen de Decreto que abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, expide la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, y modifica la fracción VI del artículo 23, el párrafo primero del artículo 33, la fracción XIX del artículo 33-Bis y la fracción IV del noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco". En esa misma sesión se aprobó por mayoría, en votación nominal, la minuta relativa al "Decreto Número 23965/LIX/12, que abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, y modifica la fracción VI del artículo 23, el párrafo primero del artículo 33, la fracción XIX del artículo 33-Bis y la fracción IV del noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco".[27]

127. Mediante oficio DPL-773-LIX de veinte de enero de dos mil doce, los diputados secretarios del Congreso del Estado de Jalisco, remitieron al gobernador de la entidad la minuta relativa al "Decreto Número 23965/LIX/12, que abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, expide la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, y modifica la fracción VI del artículo 23, el párrafo primero del artículo 33, la fracción XIX del artículo 33-Bis y la fracción IV del noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco". Cabe señalar que de dicha minuta –a la que también se le dio número de oficio DPL-773-LIX– se advierte que se trata del Decreto Número 23965/LIX/12, por medio del cual, "se abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, se expide la Ley para el Desarrollo Económico del Estado

[26] Obra en copia certificada a fojas 475 a 700 de autos. Las normas que interesan para el presente asunto se encuentran en las fojas 694 a 697.
[27] Obra en copia certificada a fojas 702 y 703, 836 a 839, así como 728 a 746, en estas últimas en lo que interesa 732 a 736.

de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, se adiciona una fracción al artículo 108 y agrega un 108-Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y se adiciona una fracción y modifica la fracción V del artículo 48 y modifica el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco."[28]

128. Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil doce, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto Número 23965/LIX/12, por medio del cual "Se abroga la Ley para el Fomento Económico del Estado de Jalisco, se expide la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco y la Ley para la Promoción de Inversiones del Estado de Jalisco, se adiciona una fracción al artículo 108 y agrega un 108-Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y se adiciona una fracción y modifica la fracción V del artículo 48 y modifica el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco."[29]

129. Posteriormente, mediante oficios DPL-845-LIX, DPL-867-LIX y DPL-869-LIX, los diputados secretarios del Congreso del Estado de Jalisco remitieron al secretario general de Gobierno de la entidad tres fes de erratas relativas al Decreto Número 23965/LIX/12,[30] las que fueron publicadas, la primera, con fecha diez de mayo de dos mil doce, y las otras dos con fecha cinco de junio del mismo año.[31]

130. DÉCIMO.—Procede ahora el análisis de los conceptos de invalidez propuestos.

Por mayoría de nueve votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando décimo, párrafos 130 al 149, en cuanto al reconocimiento de validez de la fe de erratas DPL-869-LIX, relativa al Decreto 23965/LIX/12, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 31 de marzo de 2012, identificada con el número DPL-869-LIX, publicada en ese medio de difusión el 5 de junio de 2012.

131. En primer lugar deben estudiarse los argumentos planteados por el actor, mediante ampliación de demanda, relacionados con la fe de erratas identificada con el número DPL-869-LIX, pues debe determinarse si, de conformidad con ésta, el texto de las normas combatidas que será objeto de análisis en la presente controversia constitucional es el originalmente publicado, o bien, el modificado mediante la referida fe de erratas.

---

[28] Obran a fojas 747 a 835 copias certificadas exhibidas por el Congreso de Jalisco; y a fojas 205 a 293 copia simple exhibida por el actor, extraída, a su decir, de la página electrónica oficial del Congreso de la entidad.

[29] Obra un ejemplar original a fojas 88 a 133 de autos.

[30] Obra en copia certificada a fojas 932 a 949.

[31] A fojas 197 a 204 y 1006 a 1013 obran ejemplares originales de las dos últimas publicaciones, y a fojas 959 a 977 obran copias certificadas de las tres publicaciones.

132. Al efecto el Poder Judicial actor sostiene, en esencia, que de la minuta del Decreto Número 23965/LIX/12, remitida a través del oficio número DPL-773-LIX de veinticuatro de enero de dos mil doce al Gobernador Constitucional del Estado, para su publicación –que, señala, constituye un hecho notorio por encontrarse publicada en la página de Internet oficial de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco–, se advierte que coincide con lo que efectivamente se difundió en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" del treinta y uno de marzo de dos mil doce, en relación con los artículos 48 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en virtud de lo cual, no se actualiza el supuesto de la procedencia de la fe de erratas, consistente en que la publicación contenga disposiciones distintas a lo exactamente aprobado por la asamblea, de conformidad con el artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, por lo que no es válida la modificación realizada a través de esta figura, con lo que materialmente se están realizando reformas a ese ordenamiento a través de un mecanismo que no es idóneo para ello y sin llevar a cabo el procedimiento legislativo ordinario estatuido constitucional y legalmente para tal efecto, de manera que el Poder Legislativo Local está incidiendo en el funcionamiento del Poder Judicial Estatal por medio de un acto ilegal.

133. Son parcialmente fundados los argumentos anteriores, únicamente por lo que hace a la modificación de la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, de conformidad con lo que a continuación se expone.

134. Ante todo, es pertinente tener en cuenta que si bien existieron tres fes de erratas relacionadas con el Decreto Número 23965/LIX/12 combatido, lo cierto es que, como se señaló con anterioridad, la única en la que se realizan cambios sustanciales a las normas combatidas es la identificada con el número DPL-869-LIX, publicada el cinco de junio de dos mil doce.

135. Lo anterior, pues a través de la fe de erratas identificada con el número DPL-867-LIX, publicada también el cinco de junio de dos mil doce, se reforman preceptos del Decreto Número 23965/LIX/12 diversos a los impugnados en la presente controversia constitucional; y en cuanto a la fe de erratas publicada el diez de mayo de dos mil doce, identificada con el número DPL-845-LIX, no se realizan correcciones esenciales, pues en el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado sólo se cambia en dos partes el artículo "el" por el artículo "la", mientras que en el numeral 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad simplemente se hace referencia a las fracciones IV y V que no fueron objeto de modificación, poniendo puntos suspensivos a continuación del número romano.

136. En cambio, mediante la referida fe de erratas DPL-869-LIX, que es la combatida por el actor mediante ampliación de demanda, se realizan las siguientes modificaciones:

Texto de las normas conforme a la publicación del treinta y uno de marzo de dos mil doce:	Texto de las normas conforme a la fe de erratas DPL-869-LIX:
Artículo 48.- Las salas que conozcan de la materia civil y mercantil en los asuntos de los juzgados de su jurisdicción, resolverán: I. … II. … III. … IV. … V. De las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por las leyes de la materia, y VI. …	Artículo 48.- Las salas que conozcan de la materia civil y mercantil en los asuntos de los juzgados de su jurisdicción, resolverán: I. … II. … III. … **IV. De las demandas de responsabilidad civil que se planteen contra los jueces de su jurisdicción;** V. De las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por las leyes de la materia, y **VI. De los demás asuntos que fijen las leyes.**
Artículo 101.- Las Salas del Poder Judicial conocerán asuntos de materia penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo General, conforme a las reglas siguientes: I. …; II. Los del ramo civil conocerán de: a) Las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado,	Artículo 101.- **Los juzgados de la Entidad** conocerán **de los** asuntos de materia penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo General, conforme a las reglas siguientes: I. … **II. Los del ramo civil conocerán de toda clase de juicios o trámites que determine el Consejo General dentro de sus facultades;**

susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por el artículo 108, Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Desarrollo Económico y la Ley de Promoción a la Inversión, todas ellas del estado de Jalisco; b) Toda clase de juicios o trámites que determine el Consejo General dentro de sus facultades; III. …:	III. … IV. … V. …

137. Ahora bien, la fe de erratas que se relaciona con la publicación de las normas jurídicas, tiene como objeto salvar los errores que se contengan en la publicación de un documento, los cuales pueden constituir una corrección ortográfica, su legibilidad, la confusión de palabras o su redacción, dado que resultaría engorroso reponer todo el proceso de formación de una ley o de su reforma a fin de que se haga la corrección de una imprecisión de poca relevancia. La fe de erratas también se utiliza cuando, por cualquier motivo, el texto publicado no coincide con el que fue aprobado por el órgano legislativo correspondiente; lo que puede derivar, por ejemplo, de que se haya publicado un texto diverso al establecido en la minuta legislativa, o bien, de que esta última no se haya apegado a lo decidido por el órgano deliberativo.

138. La utilización de la fe de erratas constituye una herramienta a la que puede acudir la técnica legislativa con el propósito de no restar eficacia a todo un proceso legislativo por suscitarse un error en la publicación, sin que pueda servir, desde luego, como un medio para corregir errores en las decisiones tomadas por el Congreso.

139. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco dispone en relación con la fe de erratas lo siguiente:

"Artículo 208.

"1. Corresponde a la comisión dictaminadora, con el apoyo de las Direcciones de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo y de Procesos Legislativos, preparar la minuta de lo exactamente aprobado por el Congreso del Estado y presentarla al presidente y secretarios de la mesa directiva.

"2. Cuando por cualquier causa una minuta contenga disposiciones distintas a lo exactamente aprobado por la asamblea, la comisión dictamina-

dora debe preparar la aclaración de error correspondiente, en la que se señale el texto exacto de la resolución aprobada por el Congreso del Estado.

"3. Cuando por cualquier causa una publicación contenga disposiciones distintas a lo exactamente aprobado por la asamblea, la comisión dictaminadora debe preparar la fe de erratas correspondiente, en la que se señale el texto exacto de la resolución aprobada por el Congreso del Estado.

"4. La aclaración de error en una minuta es aprobada por la asamblea y enviada al titular del Poder Ejecutivo para su publicación.

"5. La fe de erratas es elaborada y firmada por los secretarios y enviada al titular del Poder Ejecutivo para su publicación correspondiente.

"6. Constituye causal de responsabilidad en los términos de las leyes vigentes, la modificación dolosa de las minutas aprobadas por la asamblea, realizada (sic) cualquier servidor público del Poder Legislativo."

140. Por su parte, la Ley del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" establece al respecto lo que se transcribe:

"Artículo 27. Error de publicación es aquel que surge de la infidelidad de los textos y gráficos enviados por el secretario y el material publicado, en cuyo caso el director, de oficio o por orden superior, corregirá la errata en el ejemplar siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de ésta.

"En todos los demás casos el director sólo podrá publicar fe de erratas cuando éstas provengan por despacho del secretario, autorizadas en los términos del artículo 25[32] de esta ley."

141. Como se advierte de las transcripciones anteriores, conforme a la legislación del Estado de Jalisco se deberá hacer la corrección en las publicaciones oficiales cuando no coincidan los textos y gráficos enviados por el secretario general de Gobierno y el material publicado; y cuando por cualquier causa una publicación contenga disposiciones distintas a lo exactamente aprobado por la asamblea.

142. Pues bien, como se adelantó, son parcialmente fundados los argumentos planteados por el actor, en cuanto señala que no es válida la modificación que se efectuó mediante la fe de erratas identificada con el número

[32] "Artículo 25. El secretario despachará la orden oficial de publicación acompañando los contenidos en copia debidamente autorizada con su firma y sello de la dependencia."

DPL-869-LIX, publicada el cinco de junio de dos mil doce, porque con ella se están realizando reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a través de un mecanismo que no es idóneo para ello y sin llevar a cabo el procedimiento legislativo ordinario estatuido constitucional y legalmente para tal efecto, de manera que el Poder Legislativo Local está incidiendo en el funcionamiento del Poder Judicial Estatal por medio de un acto ilegal. Lo anterior, únicamente por lo que hace a la modificación de la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

143. A efecto de sustentar la afirmación anterior, resulta pertinente plasmar el texto de los artículos 48 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco conforme a lo aprobado por el Congreso de la entidad, el texto que consta en la minuta legislativa del Decreto Número 23965/LIX/12, el publicado y el modificado a través de la fe de erratas combatida.

Texto conforme al Dictamen del Decreto 23965/LIX/12:[33]	Texto conforme a la minuta del Decreto 23965/LIX/12:[34]	Texto conforme a la publicación de treinta y uno de marzo de dos mil doce:[35]	Texto conforme a la fe de erratas DPL-869-LIX:[36]
Artículo 48.- Las salas que conozcan de la materia civil y mercantil en los asuntos de los juzgados de su jurisdicción, resolverán: I. … II. … III. … IV. …	Artículo 48.- Las salas que conozcan de la materia civil y mercantil en los asuntos de los juzgados de su jurisdicción, resolverán: I. … II. … III. … IV. …	Artículo 48.- Las salas que conozcan de la materia civil y mercantil en los asuntos de los juzgados de su jurisdicción, resolverán: I. … II. … III. … IV. …	Artículo 48.- Las salas que conozcan de la materia civil y mercantil en los asuntos de los juzgados de su jurisdicción, resolverán: I. … II. … III. … **IV. De las demandas de responsabilidad civil que se planteen contra los jueces de su jurisdicción;**

[33] Obra en copia certificada a fojas 475 a 700 de autos. Las normas que interesan se encuentran en las fojas 696 a 697.
[34] Obran a fojas 747 a 835 (ver 832 y 833) copias certificadas exhibidas por el Congreso de Jalisco; y a fojas 205 a 293 (ver 290 y 291) copia simple exhibida por el actor, extraída, a su decir, de la página electrónica oficial del Congreso de la entidad.
[35] Obra un ejemplar original a fojas 88 a 133 (ver 131 y reverso).
[36] A fojas 198 y 1007 obran ejemplares originales de la publicación de dicha fe de erratas y a fojas 947 a 949 se encuentra copia certificada del oficio con que se remitió para su publicación.

V. De las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de los señalado por las leyes de la materia; y VI. …	V. De las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por las leyes de la materia, y VI. …	V. De las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por las leyes de la materia, y VI. …	V. De las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por las leyes de la materia, y VI. De los demás asuntos que fijen las leyes.
Artículo 101.- Los juzgados de la entidad conocerán asuntos de materia penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo General, conforme a las reglas siguientes: I. …; II. Los del ramo civil, conocerán de: a) Las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por el artículo 108, Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Desarrollo Económico y la Ley de Promoción a la In-	Artículo 101.- **Las Salas del Poder Judicial** conocerán asuntos de materia penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo General, conforme a las reglas siguientes: I. …; II. Los del ramo civil conocerán de: a) Las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por el artículo 108, Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Desarrollo Económico y la Ley de Promoción a la In-	Artículo 101.- **Las Salas del Poder Judicial** conocerán asuntos de materia penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo General, conforme a las reglas siguientes: I. …; II. Los del ramo civil conocerán de: a) Las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por el artículo 108, Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Desarrollo Económico y la Ley de Promoción a la In-	Artículo 101.- Los juzgados de la Entidad conocerán **de los** asuntos de materia penal, civil, familiar y mercantil, según determine el Pleno del Consejo General, conforme a las reglas siguientes: I. … **II. Los del ramo civil conocerán de toda clase de juicios o trámites que determine el Consejo General dentro de sus facultades;**

versión, todas ellas del estado de Jalisco; b) Toda clase de juicios o trámites que determine el Consejo General dentro de sus facultades; III. …:	versión, todas ellas del estado de Jalisco; b) Toda clase de juicios o trámites que determine el Consejo General dentro de sus facultades; III. …:	versión, todas ellas del estado de Jalisco; b) Toda clase de juicios o trámites que determine el Consejo General dentro de sus facultades; III. …:	III. … IV. … V. …

144. Como se aprecia de las transcripciones anteriores, es correcto lo que afirma el actor, en cuanto a que el texto de las normas conforme a la minuta remitida para su publicación y el texto que finalmente fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad son idénticos.

145. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que éste no es el único supuesto por el cual procede realizar una fe de erratas, pues ésta puede efectuarse para corregir la ortografía, la legibilidad, una confusión de palabras o su redacción, o bien, cuando, por cualquier motivo, el texto publicado no coincida con el que fue aprobado por el órgano legislativo correspondiente; lo que no necesariamente debe derivar de inconsistencias entre el texto establecido en la minuta legislativa y el finalmente publicado, pues puede acontecer también que aquélla no se haya apegado a lo decidido por el órgano deliberativo.

146. Pues bien, por lo que hace a las erratas relativas al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se advierte que simplemente tratan de dar congruencia a las diversas fracciones de dicho precepto,[37] pues al haberse agregado una fracción, entonces la conjunción "y" pasa de la fracción IV a la V, y la fracción que decía "*De los demás asuntos que fijen las leyes*" se recorre de la fracción V a la VI. Así, la fe de erratas, en relación con dicho precepto, sí se apega a la naturaleza de este tipo de actos.

147. En cuanto al primer párrafo del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, también se ajusta a la naturaleza que

[37] **Su texto, antes de las reformas contenidas en el Decreto impugnado, en lo que interesa era como se transcribe:** "Artículo 48. Las Salas que conozcan de la materia civil y mercantil en los asuntos de los juzgados de su jurisdicción, resolverán: … IV. De las demandas de responsabilidad civil que se planteen contra los jueces de su jurisdicción; y VI. De los demás asuntos que fijen las leyes."

debe tener una fe de erratas, pues del cuadro comparativo transcrito con anterioridad se advierte que en relación con dicho párrafo existió un error en la minuta y, por tanto, en el texto publicado, pues en el Dictamen del Decreto Número 23965/LIX/12 que fue sometido a consideración del Pleno del Congreso de Jalisco y que fue aprobado por éste, se establecía la competencia de "*Los juzgados de la entidad*", mientras que en la minuta y en la publicación se cambió por "*Las Salas del Poder Judicial*".

148. De esa manera, al hacerse la corrección mediante la fe de erratas para señalar nuevamente "*Los juzgados de la entidad*", se está haciendo un ajuste para que el texto publicado se apegue a lo decidido por el órgano deliberativo, en virtud de lo cual, es válida la fe de erratas también en este aspecto.

149. Cabe apuntar que el dictamen de veinticuatro de enero de dos mil doce,[38] relativo al Decreto Número 23965/LIX/12, que fue sometido a consideración del Pleno del Congreso de Jalisco, fue aprobado en lo general y en lo particular, con veintinueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, sin ningún cambio y sin que hubiera generado discusión, según consta en el acta correspondiente a la sesión ordinaria verificada por el órgano legislativo en esa misma fecha,[39] y sin que obre en autos ningún documento del que se desprenda que existió alguna modificación del dictamen referido previamente a su aprobación por el Congreso Estatal; de lo que se colige que mediante la fe de erratas se está ajustando el texto de la publicación de la norma a la voluntad expresada por el órgano legislativo en la sesión referida.

150. En cambio, se considera que no es válida la modificación que se hace respecto de la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues del cuadro comparativo transcrito anteriormente se advierte que, el texto de dicha fracción conforme al dictamen aprobado por el Congreso de la entidad, y el texto conforme a la minuta y la publicación correspondientes, son iguales, en virtud de lo cual, a través de la fe de erratas se está realizando una modificación al texto aprobado por ese órgano legislativo.

151. En efecto, en el dictamen se señalaba, respecto de la citada fracción II, que los juzgados de la entidad del ramo civil conocerían de:

Por mayoría de nueve votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando décimo, párrafos 150 al 156, en cuanto a la declaración de invalidez de la fe de erratas relativa al Decreto 23965/LIX/12, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 31 de marzo de 2012, identificada con el número DPL-869-LIX, publicada en ese medio de difusión el 5 de junio de 2012, únicamente por lo que hace a la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad.

[38] El dictamen obra en copia certificada a fojas 475 a 700 de autos. Las normas que interesan se encuentran en las fojas 696 a 697.
[39] El acta obra en copia certificada a fojas 728 a 746, en lo que interesa 732 a 736.

a) Las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Desarrollo Económico y la Ley de Promoción a la Inversión, todas ellas del Estado de Jalisco, y; b) Toda clase de juicios o trámites que determine el consejo general dentro de sus facultades. Ese mismo texto se plasmó en la minuta y en esos términos fue publicada.

152. Sin embargo, en la fe de erratas se modifica para señalar en dicha fracción, respecto de los juzgados de la entidad, únicamente que: "*II. Los del ramo civil conocerán de toda clase de juicios o trámites que determine el consejo general dentro de sus facultades*"; de manera que si bien el inciso b) sólo se subsumió al acápite de la fracción II, lo cierto es que, el contenido normativo del inciso a), en que se establecía la competencia para conocer de las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al desarrollo económico y la inversión, fue eliminado a través de la fe de erratas en comento.

153. Así, a través de la fe de erratas en análisis se realizaron modificaciones al contenido normativo de la citada fracción que no corresponden a la voluntad del legislador expresada al momento de discutir y aprobar el dictamen sometido a su consideración, por lo que se está modificando un precepto legal mediante un mecanismo que no es idóneo para ello y sin llevar a cabo el procedimiento legislativo correspondiente.

154. Lo anterior, tomando en cuenta que, como se señaló con anterioridad, el dictamen que fue sometido a consideración del Pleno del Congreso de Jalisco en sesión de veinticuatro de enero de dos mil doce, fue aprobado sin ningún cambio y sin que hubiera generado discusión.

155. En esa medida, debe declararse la invalidez de la fe de erratas por lo que hace a dicha fracción; lo que tiene como consecuencia que el análisis de los conceptos de invalidez correspondientes se realice con base en el texto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de marzo de dos mil doce, únicamente por lo que hace a la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

156. Es aplicable, en lo conducente, la siguiente tesis:

"LEY. PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE SU TEXTO DEBE ATENDERSE AL APROBADO POR LAS CÁMARAS DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO Y NO AL QUE DIFIRIENDO DE ÉSTE SE HAYA ENVIADO AL EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN.—El procedimiento de formación de la ley es un

acto complejo en el que intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y publica. Las actuaciones de ambos poderes, en conjunto, son las que dan vigencia a un ordenamiento legal, de manera que dichos actos no pueden quedar subsistentes o insubsistentes aisladamente, aunque tengan lugar en momentos distintos y emanen de órganos diferentes. Por otra parte, son las etapas de discusión y aprobación de las leyes en las que ambas Cámaras, tanto la de Origen como la Revisora, examinan las iniciativas de ley, intercambian opiniones a favor o en contra del proyecto, sea en lo general o sobre algún punto en particular, y finalmente votan el proyecto de ley; etapas o momentos en los cuales el Poder Legislativo ejerce tanto formal como materialmente su facultad legislativa y, por tanto, son las etapas del proceso legislativo en las cuales se crea la ley en sentido material, aun y cuando no pueda tenérsele como tal formalmente, pues resta aún la intervención del Poder Ejecutivo en las fases de sanción y promulgación, para que dicha ley sea obligatoria y entre en vigor. En consecuencia, el texto del decreto o ley aprobados por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que fue discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que dicho texto pueda ser modificado al remitirse para su sanción y promulgación al Ejecutivo. La voluntad conjunta de las Cámaras del Congreso de la Unión se expresa en el momento en que se discuten y aprueban los dictámenes presentados por las comisiones respectivas, sin que la mera autorización que del texto del decreto o ley, realizan los presidentes y secretarios de ambas Cámaras pueda, por sí solo, modificar o corregir la decisión que tomaron, democráticamente, cada uno de los cuerpos legislativos que integran el Congreso, y sin que dicho texto pueda ser modificado durante su etapa de promulgación. Así, aun cuando el texto final de una ley o decreto, previamente a su remisión al Poder Ejecutivo, haya sido pulido y cuidado en términos de estilo, o bien, posteriormente se publique una fe de erratas en relación al mismo, no tiene por qué diferir del texto originalmente aprobado, y mucho menos se podrá, mediante estos mecanismos, subsanar las deficiencias u omisiones que éste presente." (Novena Época, Núm. Registro digital: 183791, Pleno, tesis aislada P. VI/2003, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, página 28)

157. DÉCIMO PRIMERO.—A continuación procede el análisis de los conceptos de invalidez planteados en contra de los preceptos combatidos; en el entendido de que, en términos del considerando precedente, los relativos a la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco se analizarán tomando como base el texto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de marzo de dos mil doce, y los demás conforme al texto corregido a través de la fe de erratas identificada con el número DPL-869-LIX.

Por unanimidad de diez votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando décimo primero, párrafos 157 al 173, en cuanto al reconocimiento de validez de los artículos 48 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, refor-

mados mediante Decreto 23965/LIX/12, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 31 de marzo de 2012, y corregidos por la fe de erratas respectiva a ese decreto identificada con el número DPL-869-LIX, publicada el 5 de junio de 2012, y 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, adicionado mediante dicho Decreto, y corregido por la fe de erratas respectiva al mismo identificada con el número DPL-845-LIX, publicada en este medio de difusión el 10 de mayo de 2012.

158. En esa medida, son ineficaces los siguientes argumentos propuestos por el actor: el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco otorga facultad a las Salas del Poder Judicial del ramo civil para conocer de los casos de afirmativa ficta, y concede al Pleno del Consejo General la facultad para determinar la materia de que conocerán precisamente las citadas Salas, por lo que a través del decreto reclamado se atribuye al Consejo de la Judicatura del Estado la aptitud de determinar las materias de que conocerán dichas Salas, con independencia del tribunal al que pertenezcan; que el nuevo texto del numeral citado dota de una facultad novedosa al Consejo de la Judicatura de la entidad, consistente en la potestad de determinar la materia de los asuntos de los que conocerán las "Salas del Poder Judicial", lo que constituye una infracción al sistema jurídico impuesto por la Constitución Local, vulnerándose la autonomía e independencia del propio Poder Judicial de Jalisco, tomando en cuenta que conforme a los artículos 57, 62, 65 y 68 de dicha Constitución corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado determinar la competencia de las Salas que lo integran, al Tribunal de lo Administrativo le compete resolver los asuntos en materias administrativa y fiscal, y al Tribunal Electoral dirimir las controversias derivadas de los procesos electorales estatales, así como de los procedimientos de plebiscito y referéndum, sin que entre las facultades otorgadas al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco por el artículo 64 de la Constitución Local, se encuentre la determinación de las materias de los asuntos de que conocerán las "Salas del Poder Judicial", pues ni siquiera las funciones de administración, vigilancia y disciplina de que tal ente se encarga al interior del Poder Judicial, comprenden al Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal de lo Administrativo y Tribunal Electoral; que la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Locales, consagradas por la Constitución Federal, prevén como una de las condiciones para que en efecto se verifiquen tales notas características, la potestad exclusiva del Supremo Tribunal de Justicia para determinar el funcionamiento, integración y administración de sus Salas, debiéndose hacer extensivo tal argumento, por identidad de razón, al resto de los tribunales que integran a dicho Poder, en virtud de lo cual, si el modelo en que se inserta al Consejo de la Judicatura Estatal transgrede las ideas fundamentales referidas anteriormente, debe reputarse inconstitucional el diseño de tal órgano de administración del Poder Judicial de la entidad; que si conforme a los artículos 56, 57, 62, 64, 65 y 68 de la Constitución Política de Jalisco, se dota de verdadera autonomía al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo y al Tribunal Electoral, garantizando que el Consejo de la Judicatura Local no pueda válidamente inmiscuirse en el funcionamiento y administración de esos órganos jurisdiccionales, entonces !a posibilidad de que sea el Consejo de la Judicatura el que determine la materia de los casos de los que se ocuparán las "Salas del Poder Judicial", resulta

incompatible con el marco legal de referencia, pues supondría un sometimiento de dichos tribunales a la decisión del órgano administrativo de mérito, en cuanto al funcionamiento, integración y administración de aquellos tribunales; que ningún miembro titular del Consejo de la Judicatura, a excepción de su presidente –sólo en lo tocante al Tribunal Superior–, conoce de manera directa o tiene aptitud de imponerse de los datos fácticos, estadísticos o demás pertinentes, referentes al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo o al Tribunal Electoral, que le permita tomar una decisión adecuada, en armonía con la eficiencia y efectividad buscada en la impartición de la justicia en territorio jalisciense, en cuanto a la determinación de las materias que las "Salas del Poder Judicial" habrán de conocer; que al sustituirse la expresión "Los juzgados de la entidad" por la relativa a "Las Salas del Poder Judicial", se desterró del ordenamiento jurídico jalisciense el sustento legal, en virtud del cual, los Jueces estatales emiten sus pronunciamientos en las distintas materias sobre las que ejercen su jurisdicción, con lo que se provocó un vacío en el marco normativo estatal, puesto que ahora ni la Constitución Política jalisciense ni la ley que la reglamenta en materia de impartición de justicia, contienen previsión alguna en lo tocante al contenido de las materias, sobre las cuales, los juzgadores locales pueden emitir válidamente sus resoluciones; que lo anterior acarrea que los juzgados estatales resuelvan de determinada clase de asuntos sin que legalmente tengan dicha atribución, violentando diariamente las garantías de legalidad y seguridad jurídica, además de que, conforme a la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Consejo de la Judicatura Local tiene la potestad de fijar el número y competencia de aquéllos "de conformidad con lo que establezca la ley", con lo que ciñe a la legislatura a determinar en la ley secundaria la manera en que se fijará el número y competencia de los juzgados para que con base en lo anterior, el Consejo de la Judicatura proceda a realizar la asignación de competencias a los distintos juzgadores jaliscienses, y el legislador local, en vez de cumplir con ese mandato, asigna injustificadamente competencias a las "Salas del Poder Judicial" y por medio del mismo acto elimina la descripción de los asuntos de que podrán conocer los Jueces de la entidad, trastocando con ello a la jerarquía normativa que debe imperar en el Estado, lo que implica una violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna; que si el principio de división de poderes que debe imperar en los Estados se resguarda efectivamente mediante el aseguramiento del ejercicio independiente y autónomo de la función jurisdiccional, al no contar el sistema jurídico jalisciense con el cauce legal respectivo, a través del cual, se ejercerá la facultad de decisión judicial de mérito por parte de los juzgados del Poder Judicial, por no estar previsto el contenido de las materias sobre las que válidamente ejercerán los juzgados su respectiva jurisdicción, es indudable que no se puede hablar de que se haya conseguido el pleno acatamiento del principio constitucional de mérito, pues la actividad decisoria carente de regulación no puede considerarse como autónoma e independiente; que si el

Congreso del Estado tiene la obligación fundamental de diseñar en la entidad federativa un marco constitucional y legal que garantice el ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional, con miras a preservar el principio de división de poderes, entonces la ausencia de un conducto jurídico que ciña de manera exacta la actividad de los juzgados jaliscienses, provoca un vacío en dicho andamiaje, en el cual la función jurisdiccional se efectúa al margen de la ley que supuestamente debe reglamentarlo, lo que impide la consecución de tales notas requeridas para considerarse respetado el principio de división de poderes; y que todo lo anterior, confirma la imprecisión competencial de las "Salas del Poder Judicial" provocada por el decreto impugnado, en detrimento del marco organizativo del Poder Judicial Local, pues con motivo de tal decreto se desdibuja la exacta previsión de la competencia de cada uno de los órganos jurisdiccionales aludidos, relegando la definición de aquélla al órgano de administración del Poder de mérito.

159. Lo anterior, pues atienden a un texto que no corresponde al del primer párrafo del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pues parten de la base de que dicha norma sustituyó la competencia que establecía de "Los juzgados de la entidad" por la de "Las Salas del Poder Judicial", con lo que, entre otras cuestiones, se faculta al Consejo de la Judicatura del Estado para determinar las materias de que conocerán dichas Salas, cuando el texto de dicha norma, conforme a la fe de erratas identificada con el número DPL-869-LIX –que fue válida en relación con la corrección del párrafo referido–, continúa aludiendo a la competencia de "Los juzgados de la entidad" y no de "Las Salas del Poder Judicial".

160. Por otra parte, son infundados los argumentos propuestos por el actor en el sentido de que el concepto de "Salas del Poder Judicial" a que se hace alusión en las reformas introducidas por medio del decreto combatido, bien puede incluir indistintamente a cualquiera de las que componen al Supremo Tribunal de Justicia, al Tribunal de lo Administrativo de Jalisco y al Tribunal Electoral de la entidad, pues todos ellos llevan a cabo sus funciones actuando en Pleno o en Salas, de manera que la asignación de competencias efectuado por el Congreso jalisciense resulta imprecisa; indefinición que trae como consecuencia que se surta la competencia para conocer de los asuntos de que se trata en favor de cualquiera de las Salas que componen a los tribunales jaliscienses, trastocando de este modo el esquema organizacional del Poder Judicial Estatal que se prevé en la Constitución de la entidad, provocando a su vez una violación al principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.

161. Las normas combatidas que hacen referencia a las "Salas del Poder Judicial" son las siguientes:

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco

"Artículo 48. Las Salas que conozcan de la materia civil y mercantil en los asuntos de los juzgados de su jurisdicción, resolverán:

"…

"V. De las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, susceptibles de promoción al Desarrollo Económico y la Inversión, en los términos de lo señalado por las leyes de la materia, y …"

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco

"Artículo 108-Bis.

"Además de las facultades concedidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil contarán con facultades para conocer de las demandas de afirmativa ficta que ante ellos haga valer el Ejecutivo del Estado, para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad de los organismos señalados en la Ley para el Desarrollo Económico y la Ley para la Promoción a la Inversión, ambas del Estado de Jalisco, y cuyo objeto de enajenación sea precisamente el impulso y la promoción del desarrollo económico y la inversión, en los términos de lo señalado por el artículo anterior de esta ley y las cuales se regularán conforme al siguiente procedimiento:

"I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, deberá presentar la solicitud de declaratoria ante cualquier Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil, dentro de los cinco días naturales siguientes a que hubiese fenecido el plazo que el Congreso del Estado tiene para la resolución de las iniciativas de procedencia solicitadas para la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, para actos de promoción del desarrollo económico y la inversión;

"II. La Sala del Poder Judicial admitirá la solicitud y correrá traslado al Congreso del Estado dentro de los siguientes cinco días naturales de la presentación de la misma, para que en un término de cinco días naturales siguientes a la notificación, haga constar ante la Sala la existencia o no de la resolución que dio origen a la solicitud de la afirmativa ficta;

"III. La Sala del Poder Judicial deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud de la declaratoria dentro de los diez días naturales siguientes a la conclusión del plazo de la fracción anterior. En los casos en que el Congreso

no de contestación a la notificación señalada en la fracción anterior, o en la contestación no se haga constar la resolución de improcedencia debidamente notificada en tiempo y forma al titular del Ejecutivo del Estado, la Sala deberá resolver la procedencia de la solicitud de enajenación de bienes inmuebles; y

"IV. Es supletoria de este procedimiento la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Código Civil y de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables."

162. Si bien el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco hace referencia de manera general a "*Las Salas que conozcan de la materia civil y mercantil*", no debe perderse de vista que dicha norma se encuentra en el título segundo: "Del Supremo Tribunal de Justicia", capítulo IV, "De las Salas del Supremo Tribunal de Justicia."

163. En esa medida, no existe ninguna incertidumbre en cuanto a las Salas a las que hace referencia la norma en cuestión, pues al tratarse del capítulo relativo a las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, resulta claro que el precepto se refiere a las Salas de dicho tribunal, en específico a aquellas "*que conozcan de la materia civil y mercantil*".

164. Ahora bien, en cuanto al artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, tampoco genera incertidumbre en cuanto hace mención de "*las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil*", pues si bien, tanto el Supremo Tribunal de Justicia, como el Tribunal de lo Administrativo y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Jalisco, que constituyen los tribunales del Poder Judicial de la entidad, llevan a cabo sus funciones actuando en Pleno o en Salas,[40] lo cierto es que las únicas Salas que conocen de las materias civil y mercantil son las del

[40] "Artículo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de lo Administrativo, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. Se compondrá además por dos órganos, el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado."
"Artículo 57. … La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo y del Tribunal Electoral, su funcionamiento en Pleno o Salas; la competencia y funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece."
"Artículo 58. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado se integra por treinta y cuatro Magistrados propietarios y funciona en Pleno y en Salas, de conformidad con lo que establezca la ley reglamentaria."
"Artículo 67. El Tribunal de lo Administrativo del Estado funcionará en Pleno o en Salas. …"
"Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones el Tribunal Electoral se integrará por cinco Magistrados, de entre los cuales será electo, por ellos mismos, el presidente del Tribunal Electoral. Las sesiones de resolución de las Salas serán públicas."

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política de la entidad, que dispone que a éste le corresponde conocer de todas las controversias jurisdiccionales del orden penal, civil, de lo familiar y mercantil; mientras que el Tribunal de lo Administrativo de la entidad, tiene a su cargo dirimir controversias de carácter administrativo y fiscal (y los conflictos laborales que se susciten con sus propios trabajadores); y el Tribunal Electoral, la resolución de controversias relativas a procesos electorales.[41]

165. En esa medida, al hacer referencia la norma a las "*las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil*", se entiende que se refiere a las Salas del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.

166. De esa manera, no asiste la razón al actor, al sostener que la indefinición de las normas en estudio trae como consecuencia que se surta la competencia para conocer de los asuntos de afirmativa ficta de que se trata en favor de cualquiera de las Salas que componen a los tribunales jaliscienses.

167. Además, el artículo 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, debe interpretarse en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, en cuanto este último señala la competencia de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco para conocer de las demandas de afirmativa ficta para actos de enaje-

---

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco
"Artículo 77. El Pleno del Tribunal Electoral se integrará e iniciará sus funciones, para conocer de toda controversia que se suscite con motivo de los procesos electorales, en la segunda quincena del mes de enero del año de la elección, y entrará en receso hasta que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado haga la declaratoria de la conclusión del proceso electoral de que se trate. ... Durante el receso, funcionará una Sala Permanente, integrada por tres Magistrados del Tribunal Electoral, la cual conocerá de: ..."

[41] "Artículo 62. Al **Supremo Tribunal de Justicia** le corresponden las siguientes atribuciones:
"I. Conocer de todas las controversias jurisdiccionales del orden penal, **civil**, de lo familiar y **mercantil**, de conformidad con lo que establezcan las leyes estatales y federales."
"Artículo 65. El **Tribunal de lo Administrativo** tendrá a su cargo dirimir **las controversias de carácter administrativo y fiscal** que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquéllas, con los particulares. Igualmente de las que surjan de entre dos o más entidades públicas de las citadas en el presente artículo. El Tribunal de lo Administrativo resolverá además, los conflictos laborales que se susciten con sus propios trabajadores."
"Artículo 68. El **Tribunal Electoral** tendrá a su cargo la resolución de toda **controversia que se suscite con motivo de los procesos electorales** para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, de los órganos de gobierno municipales y en cuanto a la realización de los procesos de plebiscito y referéndum."

nación de bienes inmuebles, cuyo procedimiento se detalla en el artículo 108-Bis en comento.

168. Por último, el actor sostiene que el nuevo dispositivo 108-Bis, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, prevé la posibilidad de que el titular del Ejecutivo Local pueda presentar la solicitud de declaratoria de afirmativa ficta ante cualquier Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil, o sea, ante la Sala que sea de su elección, lo que trae como consecuencia que, con independencia de los sistemas de distribución de asuntos que se hallen instituidos en los mencionados tribunales, el citado servidor público pueda decidir libremente incoar la demanda de afirmativa ficta ante la Sala específica de su elección, lo que deviene, además, en una infracción al principio de división de poderes, pues la independencia y autonomía del Poder Judicial se dejan en entredicho, al sujetar la actuación de un órgano jurisdiccional, en particular, al arbitrio del gobernador, y no en función de los mecanismos de distribución de asuntos ya diseñados para asegurar, en la medida de lo posible, una impartición de justicia rápida e imparcial.

169. A efecto de analizar los argumentos anteriores, resulta conveniente transcribir una vez más la norma referida:

"Artículo 108-Bis.

"Además de las facultades concedidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil contarán con facultades para conocer de las demandas de afirmativa ficta que ante ellos haga valer el Ejecutivo del Estado, para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad de los organismos señalados en la Ley para el Desarrollo Económico y la Ley para la Promoción a la Inversión, ambas del Estado de Jalisco, y cuyo objeto de enajenación sea precisamente el impulso y la promoción del desarrollo económico y la inversión, en los términos de lo señalado por el artículo anterior de esta ley y las cuales se regularán conforme al siguiente procedimiento:

"I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, deberá presentar la solicitud de declaratoria ante **cualquier** Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil, dentro de los cinco días naturales siguientes a que hubiese fenecido el plazo que el Congreso del Estado tiene para la resolución de las iniciativas de procedencia solicitadas para la enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, para actos de promoción del desarrollo económico y la inversión;

"II. La Sala del Poder Judicial admitirá la solicitud y correrá traslado al Congreso del Estado dentro de los siguientes cinco días naturales de la presentación de la misma, para que en un término de cinco días naturales siguientes a la notificación, haga constar ante la Sala la existencia o no de la resolución que dio origen a la solicitud de la afirmativa ficta;

"III. La Sala del Poder Judicial deberá resolver sobre la procedencia de la solicitud de la declaratoria dentro de los diez días naturales siguientes a la conclusión del plazo de la fracción anterior. En los casos en que el Congreso no de contestación a la notificación señalada en la fracción anterior, o en la contestación no se haga constar la resolución de improcedencia debidamente notificada en tiempo y forma al titular del Ejecutivo del Estado, la Sala deberá resolver la procedencia de la solicitud de enajenación de bienes inmuebles; y

"IV. Es supletoria de este procedimiento la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Código Civil y de Procedimientos Civiles y demás leyes aplicables."

170. Este Tribunal Pleno estima que la norma en comento, si bien tiene una redacción desafortunada, admite más de una interpretación, en virtud de lo cual, debe preferirse aquella que es conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de manera que procede interpretar el precepto en comento, en el sentido de que, cuando refiere que el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco deberá presentar la solicitud de declaratoria de afirmativa ficta "*ante cualquier Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil*", no se refiere a que sea el gobernador de la entidad quien decida la Sala que ha de conocer de la solicitud, sino más bien, que cualquiera de las Salas del Tribunal Superior de Justicia que conozcan de dichas materias, es competente para resolver las solicitudes de afirmativa ficta, pero ello será conforme a los mecanismos de distribución de asuntos que rijan en ese tribunal, de manera que las solicitudes de afirmativa ficta presentadas por el Ejecutivo Local serán turnadas en términos de los sistemas que para tal efecto se hallen instituidos en dicho tribunal.

171. En esa medida, resulta igualmente infundado el concepto de invalidez de que se trata.

172. Es aplicable, en lo conducente, la siguiente tesis:

"INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN.—La interpre-

tación de una norma general analizada en acción de inconstitucionalidad, debe partir de la premisa de que cuenta con la presunción de constitucionalidad, lo que se traduce en que cuando una disposición legal admita más de una interpretación, debe privilegiarse la que sea conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cuando una norma legal admita distintas interpretaciones, algunas de las cuales podrían conducir a declarar su oposición con la Ley Suprema, siempre que sea posible, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optará por acoger aquella que haga a la norma impugnada compatible con la Constitución, es decir, adoptará el método de interpretación conforme a ésta que conduce a la declaración de validez constitucional de la norma impugnada, y tiene como objetivo evitar, en abstracto, la inconstitucionalidad de una norma; sin embargo, no debe perderse de vista que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control que tiene como una de sus finalidades preservar la unidad del orden jurídico nacional, a partir del parámetro constitucional; como tampoco debe soslayarse que tal unidad se preserva tanto con la declaración de invalidez de la disposición legal impugnada, como con el reconocimiento de validez constitucional de la norma legal impugnada, a partir de su interpretación conforme a la Ley Suprema, ya que aun cuando los resultados pueden ser diametralmente diferentes, en ambos casos prevalecen los contenidos de la Constitución. En consecuencia, el hecho de que tanto en el caso de declarar la invalidez de una norma legal, como en el de interpretarla conforme a la Constitución, con el propósito de reconocer su validez, tengan como finalidad salvaguardar la unidad del orden jurídico nacional a partir del respeto y observancia de las disposiciones de la Ley Suprema, este Tribunal Constitucional en todos los casos en que se cuestiona la constitucionalidad de una disposición legal, debe hacer un juicio razonable a partir de un ejercicio de ponderación para verificar el peso de los fundamentos que pudieran motivar la declaración de invalidez de una norma, por ser contraria u opuesta a un postulado constitucional, frente al peso derivado de que la disposición cuestionada es producto del ejercicio de las atribuciones del legislador y que puede ser objeto de una interpretación que la haga acorde con los contenidos de la Ley Suprema, debiendo prevalecer el que otorgue un mejor resultado para lograr la observancia del orden dispuesto por el Constituyente y el órgano reformador de la Norma Suprema." (Novena Época, registro digital: 170280, Pleno, tesis aislada P. IV/2008, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1343)

173. En las relatadas consideraciones, procede declarar la invalidez de la fe de erratas combatida, únicamente por lo que hace a la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y

reconocer la validez de las normas impugnadas; invalidez que surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO.—Se declara la invalidez de la fe de erratas relativa al Decreto Número 23965/LIX/12, identificada con el número DPL-869-LIX, publicada el cinco de junio de dos mil doce en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", únicamente por lo que hace a la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco.

TERCERO.—Con la salvedad indicada en el resolutivo anterior, se reconoce la validez de la fe de erratas relativa al Decreto Número 23965/LIX/12, identificada con el número DPL-869-LIX, publicada el cinco de junio de dos mil doce en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

CUARTO.—Se reconoce la validez de los preceptos impugnados, en el entendido de que la fracción II del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco corresponde al texto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el treinta y uno de marzo de dos mil doce.

QUINTO.—Publíquese esta resolución en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, en el Diario Oficial de la Federación y en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza, respecto de los considerandos

primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno relativos, respectivamente, a la competencia, a la precisión de las normas y actos impugnados, a la legitimación activa, a la legitimación pasiva, a la legitimación del compareciente por parte de la Procuraduría General de la República, a la existencia de los actos impugnados, a la oportunidad de la demanda y su ampliación, a las causas de improcedencia y sobreseimiento y a los antecedentes relevantes.

En relación con los puntos resolutivos segundo y tercero:

Se aprobaron por mayoría de nueve votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza, respecto del considerando décimo. El Ministro Cossío Díaz votó en contra y anunció voto particular.

En relación con el punto resolutivo cuarto:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza, respecto del considerando décimo primero.

En relación con el punto resolutivo quinto:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza.

El Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión de veinte de octubre de dos mil catorce previo aviso a la presidencia.

El Ministro presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

La presente ejecutoria también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de marzo de 2015.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUTORIAS Y TESIS
QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA

Subsección 1.
TESIS AISLADAS Y, EN SU CASO, EJECUTORIAS

CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL LAUDO QUE LOS RESUELVE, PERMITE AL JUZGADOR EXAMINAR NO SÓLO LOS ASPECTOS FORMALES DE ESA DECISIÓN, SINO INCLUSO, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA ACTORA. La modificación colectiva de las relaciones de trabajo tiene su origen principalmente en aspectos relacionados con la producción, pero también con factores económicos y con circunstancias del mercado, lo cual trae como consecuencia la posibilidad de realizar cambios en la jornada de trabajo, en los salarios, en las prestaciones o en otras condiciones de trabajo, con el fin de preservar la fuente de empleo, sin llegar a otras hipótesis como son la suspensión colectiva, equivalente al paro, o el cierre definitivo de la empresa. Lo anterior debe analizarse e interpretarse conforme al principio de justicia social, previsto en los artículos 123, apartado A, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2o. de la Ley Federal del Trabajo, el cual consiste en que las normas de trabajo tienen como finalidad fundamental conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, por lo que la modificación de las condiciones de trabajo debe ser un elemento relevante en la solución, porque si se decreta la reducción de las prestaciones laborales sin que se materialice la viabilidad de la empresa, es evidente que esa solución no es acorde con el principio de justicia social. Por tanto, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aparta del criterio contenido en la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala con el rubro: "CONFLICTOS DE ORDEN ECONÓMICO, AMPARO CONTRA LOS LAUDOS DICTADOS EN LOS." (*), en el que se estableció una limitación temática al estudio de fondo que pueden hacer los juzgadores de amparo, de acuerdo con la cual no es posible analizar los temas económicos,

Nota: (*) La tesis aislada citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, Tomo LXXXII, página 461.

sino que únicamente se pueden estudiar las cuestiones jurídicas, para sustentar otro conforme al cual puede analizarse de fondo la situación económica de las empresas que promuevan los conflictos colectivos de naturaleza económica, en la medida en que lo decidido en ellos puede incidir en los derechos fundamentales de los trabajadores, para concluir que en todos los casos debe estar plenamente justificada esa afectación en el marco jurídico-constitucional, siendo entonces necesario examinar, con la ayuda de los peritos, la situación económica de la empresa; por tanto, la función del Alto Tribunal y, en general, de los Jueces y tribunales de amparo, no puede limitarse al análisis de aspectos meramente instrumentales, como lo son que se hayan seguido las formalidades del procedimiento; que las pruebas se hayan admitido o desechado correctamente o que el laudo se haya dictado conforme a las leyes existentes.

P. IV/2015 (10a.)

Amparo directo 4/2009. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. 29 de enero de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Impedido: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano Cancino.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número IV/2015 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES FUNDAMENTAL EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL REALIZADA POR LA JUNTA RESPONSABLE, DADA SU ESPECIAL RELEVANCIA. En virtud de la naturaleza de los conflictos colectivos de naturaleza económica, en los que más que cuestiones jurídicas deben tomarse en cuenta otros factores, como los económicos y técnicos, dependiendo del ramo y la especialidad a que se dedique la empresa involucrada, es fundamental la opinión de los peritos para resolver el asunto, por lo que la Junta debe darle un valor preponderante, esto es, debe valorarla conforme a las reglas de la lógica y la experiencia para establecer si considera que el dictamen contiene elementos que lo hagan verosímil o no. Por ello, en atención al principio de justicia social dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en los criterios jurispru-

denciales que existen en el sentido de que el juzgador tiene libertad para valorar la prueba pericial, en el caso de los conflictos colectivos de naturaleza económica, los dictámenes periciales son una guía fundamental para que las Juntas resuelvan esta clase de juicios. De ahí que en el juicio de amparo directo es fundamental el análisis de constitucionalidad de la valoración de la prueba pericial realizada por la Junta, pues las opiniones periciales representan un medio de convicción de importancia superior y a la que debe darse un alcance probatorio mayor que alguna otra en relación con la causa del conflicto y con su posible solución.

P. V/2015 (10a.)

Amparo directo 4/2009. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. 29 de enero de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Impedido: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano Cancino.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número V/2015 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. SÓLO PROCEDE APLICARLA CUANDO LE BENEFICIE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, la suplencia de la queja deficiente en materia laboral sólo se aplicará en favor del trabajador, siempre y cuando se le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concedérsele el amparo, por lo que no procede analizar el acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiarlo, lo perjudica o no le reporta utilidad alguna.

P. VI/2015 (10a.)

Amparo directo 4/2009. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. 29 de enero de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Impedido: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano Cancino.

El Tribunal Pleno, el veinticuatro de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2015 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Subsección 2.

EJECUTORIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE NO CONTIENEN CRITERIOS VINCULATORIOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y, EN SU CASO, LAS TESIS RESPECTIVAS

DELITOS CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO 467 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REMITE A LA FRACCIÓN IV DEL NUMERAL 245 DEL MISMO ORDENAMIENTO, QUE CONTIENE EL LISTADO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS PARA SANCIONAR AL QUE LAS VENDA O SUMINISTRE A MENORES DE EDAD O INCAPACES, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, TAXATIVIDAD, PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA, ASÍ COMO EL DERECHO A LA SALUD. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos –por la invalidez exclusiva de la porción normativa que indica "mediante cualquier forma"– y José Fernando Franco González Salas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz votó en contra de algunas consideraciones. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se apartó de las consideraciones alusivas al derecho a la salud. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 1 DE DICIEMBRE DE 2014. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al uno de diciembre de dos mil catorce.

VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2014, promovida por el procurador general de la República, y

RESULTANDO:

PRIMERO.—**Presentación de la acción.** Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

a) Poder Legislativo Federal.
b) Poder Ejecutivo Federal.

Norma general cuya invalidez se reclama:

• El artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, en la porción normativa que hace referencia a la fracción IV del artículo 245 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil trece.

SEGUNDO.—**Derechos fundamentales violados.**

El promovente señaló como derechos fundamentales violados los que se plasman en los artículos:

• De la Constitución Federal: 4o., 14 y 22.

• De la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 7.2.

• Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 12.

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador): 10.

TERCERO.—**Conceptos de invalidez.** En sus conceptos de invalidez adujo, en síntesis, lo siguiente:

I. El artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, al remitir al listado contenido en la fracción IV del artículo 245 de la propia ley, viola los derechos de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, contenidos en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Con base en los principios de certeza y exacta aplicación en materia penal, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas, respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión del ilícito. Esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, el de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley.

El mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma.[1]

Así pues, para garantizar debidamente la seguridad jurídica de los ciudadanos, no basta con una tipificación confusa indeterminada que obligue a los gobernados a tener que realizar labores de interpretación y, de esa manera, tratar de conocer lo que les está permitido y lo que les está vedado hacer. Por ello, es esencial que toda formulación típica sea lo suficientemente clara y precisa como para permitirles programar su comportamiento sin temor a verse sorprendidos por sanciones que en modo alguno pudieron prever. En este aspecto, la norma penal no debe inducir a errores con motivo de su deficitaria redacción.

Ahora bien, el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, remite a un listado de sustancias psicotrópicas entre las que se encuentran sustancias que sirven para el tratamiento de diversos padecimientos, cuya venta y suministro sí están permitidos, conforme a lo señalado en el artículo 252 de la Ley General de Salud, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por el citado ordenamiento.

En este sentido, el precepto que ahora se combate es violatorio del derecho fundamental de seguridad jurídica, al crear confusión en los destinatarios de la norma. No se tiene la certeza sobre si la venta y suministro de las sustancias enumeradas en la fracción IV ya mencionada están permitidos o vedados.

En el caso de personas menores de edad o incapaces, puede ser que, por prescripción médica, requieran de tratamiento de diversos padecimientos, como obesidad, psicosis, antidepresivos, tratamiento contra migraña, sedan-

---

[1] Apoya lo anterior el criterio sustentado en la tesis de rubro: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS."

tes, entre otros. Por tanto, no es posible determinar si prevalece lo dispuesto en el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, que establece una prohibición absoluta.

El artículo 467 Bis de la Ley General de Salud no sólo genera inseguridad jurídica al destinatario de la norma (persona que venda o suministre bebidas alcohólicas, entre otras, a menores de edad o incapaces), sino que permite la discrecionalidad del juzgador para tener por actualizada o no la conducta delictiva, en contravención al principio de exacta aplicación en materia penal.

Es importante resaltar que, del proceso legislativo que condujo a la emisión del artículo 467 Bis –concretamente en la iniciativa–, se desprende que, el legislador buscó frenar el consumo de inhalantes que se encuentran en diversos productos de uso común, cuya fácil adquisición ha disparado el problema de adicción en menores de edad, al considerar que el uso de esas sustancias en adolescentes entre los 12 y 17 años se ha incrementado un 50% en los últimos años. Tal como se señala a continuación:

La iniciativa de adición a la Ley General de Salud originalmente proponía el siguiente tipo penal:

"Artículo 467 Bis. Al que venda sustancias inhalantes con efectos psicotrópicos, a menores de 18 años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate (equiparable al delito de corrupción de menores)."

Sin embargo, en el dictamen se modificó la redacción de la norma, al considerar que las sustancias inhalantes con efectos psicotrópicos se encontraban descritas en la clasificación realizada en el artículo 245 de la Ley General de Salud, en sus fracciones IV y V.

Sin embargo, una de las sustancias mencionadas en el catálogo causa especial preocupación, porque su venta, comercialización o suministro no está controlado: se trata de la cafeína.[2]

Como se observa, el legislador federal estableció una prohibición absoluta en relación con la venta o suministro a menores o incapaces, sin observar

[2] En relación con esta sustancia, es preciso citar la tesis de rubro: "CAFEÍNA. SU POSESIÓN NO ES PUNIBLE, POR LO QUE NO EXISTE CONCURRENCIA APARENTE DE NORMAS CON UNA LEY DE CARÁCTER PENAL."

que no en todos los casos y proporciones o concentración se ocasionan los problemas sanitarios que el legislador buscó prevenir y evitar.

II. En su segundo concepto de invalidez, el promovente aduce que el artículo 247 Bis de la Ley General de Salud, viola el artículo 22 constitucional, al establecer una pena que no es proporcional al delito que sanciona y al bien jurídico que pretende protegerse.

Conforme al proceso legislativo que dio lugar al artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, su objetivo es frenar el uso de sustancias inhalantes con efectos psicotrópicos. En este sentido, destaca que el bien jurídico tutelado por la norma de salud, y particularmente la de los menores e incapaces.

Se reitera que las sustancias comprendidas en la fracción IV del citado artículo son sustancias que, si bien están controladas, lo cierto es que se emplean para la fabricación de medicamentos, que pueden ser necesarios para el tratamiento médico de menores e incapaces. Además se destaca nuevamente que la cafeína es una de las sustancias enumeradas. Este compuesto no sólo se emplea para la fabricación de medicamentos, sino que se encuentra en diversos productos que pueden ser legalmente suministrados a menores de edad e incapaces (como refrescos, café, té, chocolate, cafiaspirinas, ente otros).

Entonces el hecho de que el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, sancione con una pena de prisión de siete a quince años a la persona que venda o suministre sustancias, como la cafeína, a menores o incapaces "mediante cualquier forma", es totalmente desproporcionada. Esta pena no toma en cuenta el bien jurídico que pretende protegerse, ya que no considera el grado de daño o beneficio a la salud que pueden hacer las sustancias enumeradas en la fracción IV del artículo 215 de la citada ley.

El precepto que se combate es un ejemplo de la tendencia a la expansión punitiva, que precisamente es contraria al principio de intervención mínima (o última ratio) del derecho penal, que prevalece en nuestro sistema jurídico. Consecuentemente la norma combatida viola el artículo 22 constitucional, porque establece una pena desproporcionada, que no pondera adecuadamente lo que se pretende sancionar, ni el grado de afectación al bien jurídico que pretende tutelarse.

III. El artículo tildado de inconstitucional, al remitir al listado viola el derecho a la salud contenido en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Federal, así como el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo de San Salvador.

El artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Federal, reconoce que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...". En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo de San Salvador reconocen el derecho a la salud. Este último define salud como "el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social".

Dado el alcance del derecho a la salud, resulta que el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud es violatorio del mismo, pues prohíbe la venta o suministro a menores de edad o incapaces de las sustancias enumeradas en la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud, a pesar de que se emplean en diversos medicamentos y sirven para dar tratamiento médico a varios padecimientos psicológicos o como sedantes o estimulantes, entre otros usos. Y ninguna de esas sustancias se encuentra en la composición de inhalantes y solventes, los cuales fueron objeto de discusión en el proceso legislativo que culminó con la adición del precepto impugnado.

Así se viola el derecho a la salud, al no prever excepción alguna (como podría ser el consumo con fines medicinales) para los menores e incapaces. La norma pasa por alto que la clasificación de estas sustancias se realizó precisamente atendiendo a su valor terapéutico.

CUARTO.—**Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad.** Mediante proveído de tres de enero de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número **2/2014** y, por razón de turno, tocó fungir como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Por auto de seis de enero siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.—**Informe de la Cámara de Senadores.**

En su escrito expuso las razones y fundamentos de la validez de la norma, y respecto a la validez material señaló lo siguiente:

I. Pese a lo argumentado por el procurador general de la República, el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, es constitucional en atención a las siguientes precisiones:

1. Los tipos penales se encuentran inmersos en un sistema más o menos ordenado de normas para proteger determinados bienes o intereses jurídi-

cos que el legislador estima deben salvaguardarse de forma más enérgica, mediante la amenaza de una sanción penal.

Así, el hecho de que el bien jurídico tutelado forme parte de la noción del tipo penal, en cuanto constituye su presupuesto, tiene una innegable trascendencia en el correspondiente juicio de tipicidad, que sólo puede afirmarse que existe cuando, además de verificarse la relación de todos los elementos de la figura típica, se dañe o concretamente se ponga en peligro el bien jurídico tutelado en el correspondiente tipo penal.

2. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que una disposición normativa no necesariamente es inconstitucional si el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa. Es por eso que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente y no a la mayor precisión imaginable.

De la norma tildada de inconstitucional se pueden observar claramente los elementos objetivos, la conducta y las circunstancias de ejecución. La conducta prevista en este artículo, se reviste de un elemento subjetivo que trasciende el dolo y la culpa, y que se encuentra supeditado al bien jurídico tutelado: la salud. De modo que, el carácter antijurídico de la conducta ahí descrita, tiene como eje fundamental para la valoración del elemento subjetivo, el bien jurídico tutelado.

De lo anterior se colige que, el bien jurídico tutelado lo constituye la salud de los menores e incapaces, y el elemento subjetivo lo constituye el ánimo del sujeto activo de perjudicar dicho bien; por lo que, es evidente que el artículo bajo estudio, no pretende establecer una prohibición lisa y llana como lo pretende hacer ver el accionante, ni mucho menos resulta confusa para el juzgador.

II. Como segundo aspecto de validez, el accionante manifestó que la sanción no es proporcional a la conducta que se sanciona y al bien jurídico tutelado, el cual es la salud de los menores e incapaces. De modo que cualquiera que suministre aun por cuestiones de salud, un medicamento que contenga alguna de las sustancias con una pena de siete a quince años. Hizo también referencia a cafeína que no es una sustancia cuya venta esté controlada.

Dicho concepto de invalidez resulta infundado, ya que el tipo penal previsto en el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, prohíbe la venta de determinadas sustancias a los menores e incapaces y el suministro de las mismas, siempre ponderado en este último supuesto, a la existencia de una afectación a la salud de los menores e incapaces, por lo que no es objeto

de valoración, el suministro de las sustancias enunciadas en la fracción IV del artículo 245 de la referida ley, si con ello no se afecta la salud del menor e incapaz, ni mucho menos, la que se hace bajo prescripción médica, ya que son conductas excluidas del tipo penal.

En efecto, se cumple el principio de proporcionalidad de la sanción y, por ende, lo establecido en el artículo 22 constitucional, ya que la disposición en estudio, pese al amplio margen de posibilidades en la forma en la comisión de la conducta, prevé asimismo, una penalidad mínima de siete años y una máxima de quince años de prisión, esto porque el legislador consideró prever un castigo excepcional, atendiendo al bien jurídico tutelado y a los sujetos a favor de los cuales se crea.

Citó como sustento, la jurisprudencia de rubro: "PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

El indicado precepto legal, al establecer la penalidad de siete a quince años de prisión para el delito especial previsto en el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, no viola el artículo 22 constitucional, ya que la pena señalada no es de las proscritas por ese precepto constitucional ni puede calificarse como inusitada y trascendental, en tanto que no se trata de una pena abolida por inhumana o cruel, ni pretende aplicarse a persona distinta de quien cometa la conducta típica.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el legislador en materia penal tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal; es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados.

Por lo anteriormente expuesto, es dable concluir que no hay contravención al artículo 22 constitucional, pues las conductas que no afecten al bien jurídico tutelado están excluidas del tipo penal, se provee al juzgador un mínimo y un máximo en la penalidad, y se otorga un amplio margen de valoración de los elementos subjetivos de la conducta, atendiendo a determinar el grado de culpabilidad diferenciando en los elementos normativos descritos en las fracciones IV y V del artículo 245 de la Ley General de Salud, el grado de afectación a la salud pública, además de disponer del resto de la norma especial para clarificar y determinar la individualización de la pena, atendiendo incluso a las normas técnicas a las que remite el ordenamiento.

Finalmente, indicó que resulta inatendible e infundado el concepto de invalidez en el que el procurador afirma que, la remisión que hace el tipo penal bajo estudio a la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud,

del mismo ordenamiento, es violatoria de derechos humanos, ya que violenta el derecho a la salud, al limitar el acceso de menores e incapaces a la compra o a que le sean suministrados medicamentos que se constituyan de las sustancias mencionadas en dicha fracción. Por las razones siguientes:

a) El tipo penal, conforme a la interpretación correcta del mismo, no castiga el suministro de medicamentos o sustancias de las ahí señaladas, cuando se trate de fines terapéuticos, así como en el resto de los posibles supuestos en que no se afecte el bien jurídico salvaguardado.

b) Por tanto, la prohibición no constituye una determinación lisa y llana, sino que está sujeta a la valoración de la afectación del bien jurídico tutelado y los elementos subjetivos de la conducta. Siendo restringida aún más allá de la literalidad, sin atender al contexto de la norma; la interpretación dada por el accionante.

Por lo que, contrario a lo sostenido por el procurador, se está salvaguardando ampliamente el derecho a la salud, no sólo de los menores e incapaces, sino de la sociedad misma, ante las consecuencias del fenómeno de la drogadicción.

Citó como sustento la tesis de rubro: "DERECHO A LA SALUD. FORMA DE CUMPLIR CON LA OBSERVACIÓN GENERAL NÚMERO 14 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA GARANTIZAR SU DISFRUTE."

En este orden de ideas, señaló que los delitos contra la salud tienen precisamente el objetivo de proteger la salud pública, al prevenir una afectación de la comunidad, en este caso, es la venta o suministro a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, de sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de la Ley General de Salud. Por lo que, el legislador está promoviendo por un lado, la tranquilidad social a través de la penalización de determinadas conductas relacionadas con la venta y suministro de sustancias psicotrópicas a menores e incapaces y, por otro lado, trata de inhibir la proliferación de la adicción a dichas sustancias.

SEXTO.—**Informe de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.**

El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en su informe señaló lo siguiente:

La garantía de seguridad jurídica, obedece al conjunto de modalidades jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier autoridad para pro-

ducir válidamente la afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, y que se traduce en una serie de requisitos, condiciones, elementos, etcétera.

Asimismo, la garantía de legalidad implica que, no se podrá sancionar penalmente si no existe disposición legal expresa que imponga la pena por la realización de una conducta considerada como delito.

Así, en la presente acción de inconstitucionalidad, el procurador considera que se violentan los principios de seguridad jurídica y de legalidad, con base en los principios de certeza y exacta aplicación de la norma en materia penal. Y, esta consejería jurídica es respetuosa del actuar del procurador general de la República y estará al pendiente de la resolución de este Alto Tribunal.

SÉPTIMO.—**Informe de la Cámara de Diputados.**

El presidente de la mesa directiva en su informe mencionó que, los conceptos de invalidez hechos valer en el escrito inicial de demanda devienen en una parte infundados, y por otra, inoperantes por las razones siguientes:

I. La norma impugnada es formal y materialmente constitucional, en virtud de que el procedimiento legislativo por el cual fueron expedidas cumplió con los requisitos formales que disponen los artículos 71 y 72 constitucionales; además de ajustarse al texto de la Ley Fundamental, por lo que no resultan violatorias de los artículos 4o, 14 y 22 constitucionales, así como tampoco de los artículos 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

El actor manifestó que el artículo tildado de inconstitucional, conculca los principios de certeza y seguridad jurídica al destinatario de la norma, y permite la discrecionalidad del juzgador para tener por actualizada o no la conducta delictiva.

Con el objetivo de evidenciar la falta de sustento del aserto anterior, es procedente atender a lo que señala el artículo 14 constitucional, que consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple

analogía o mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.

Cabe apuntar que dichas exigencias derivan de la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito, entendido éste como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley, y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de rubro: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR."

Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de la prohibición pueda ser conocida por el destinatario de la norma, esto es, que su texto describa claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se pueden aplicar a quienes las realicen.

De los preceptos tildados de inconstitucionales por el promovente, se puede desprender que de manera clara se identifican los elementos del tipo:

a) Sujeto activo: cualquier persona (carácter general).

b) Conducta reprochable: la venta o suministro a menores o incapaces de las sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de la Ley General de Salud.

c) Medio: a través de cualquier forma. y

d) Pena: de siete a quince años de prisión.

Además, conforme a la doctrina esbozada por Georg Henrik Von Wright, tendríamos lo siguiente:

A. Núcleo normativo

Primero. Carácter: prohibitivo.

Segundo. Contenido: venta o suministro (467 Bis).

Tercero. Condiciones de aplicación: Que los sujetos a los que se les administre sean menores o incapaces. Que las sustancias se encuentren

comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta ley (remisión a la norma de salud correspondiente).

B. Elementos fuera del núcleo normativo

Primero. Autoridad: es una norma emitida por el Congreso de la Unión.

Segundo. Sujeto Normativo: se trata de una norma general.

Tercero. Ocasión: la norma es aplicable en el territorio nacional y de vigencia indefinida.

Cuarto. Promulgación: está formulada en lenguaje escrito.

Quinto. Sanción de siete a quince años de prisión.

De lo anterior, se advierte que el tipo penal que se compone de elementos objetivos, claros y precisos, que no presentan ambigüedad o laguna alguna, por lo que es inconcuso que el 467 Bis de la Ley General de Salud no vulnera los principios de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal contenidos en el artículo 14 constitucional y en el 7, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No obstante lo anterior, en relación con la remisión dentro del texto penal al artículo 245, fracciones IV y V, de la Ley General de Salud, se advierte que la misma no vulnera el principio de taxatividad, pues dicha circunstancia no torna la descripción típica, es vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación; pues el precepto al que remite la disposición en cita, también reviste el carácter de una norma general y se encuentra en el mismo ordenamiento.

II. El promovente sostiene en su segundo concepto de invalidez, que el "*artículo 247 Bis de la Ley General de Salud*" violenta el artículo 22 constitucional. Al respecto cabe considerar que la Ley General de Salud no cuenta con un artículo "247 Bis", lo cual conduciría a desestimar el concepto de invalidez señalado. Sin embargo, de la lectura integral del mismo, se llega a la conclusión de que la verdadera convicción del actor fue impugnar el artículo 467 Bis, de la citada ley.

El actor sostuvo que el precepto impugnado controvierte el principio de proporcionalidad en materia penal. Dicha afirmación deviene claramente

infundada; pues deriva de una equívoca o insidiosa interpretación que del principio de proporcionalidad en materia penal expone el actor.

El legislador tiene la facultad para establecer los delitos y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, como bien lo señala el artículo 73, fracción XXI, constitucional. Derivado de ello, el legislador tiene un amplio margen de libertad configuradora para crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados; todo ello de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos pueden estar causando o lleguen a causar en el conglomerado social.

Sin embargo, dichas facultades no son ilimitadas, al configurar leyes penales, debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano.

El legislador debe proporcionar un marco penal abstracto que permita al juzgador individualizar la pena, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, tales como: la lesión, o puesta en peligro del bien, la intervención del agente para causar la lesión o crear el riesgo, así como otros factores sociales o individuales que sirvan para establecer la menor exigibilidad de la conducta.

Así tomando en cuenta la multiplicidad de factores que deben estar presentes en la mente del Juez al momento de determinar el quántum de la pena a imponer al sujeto activo, es claro que mediante un sistema de imposición de sanciones en un tiempo o plazo fijos, no se haría posible tal individualización, toda vez que cualquiera que fuera la conducta omitida o realizada y las circunstancias de hecho acaecidas, el lapso de la sanción sería siempre, para todos los casos, invariable, con lo cual se cerraría la posibilidad de justificar adecuadamente la determinación de la pena, en relación con la culpabilidad del sujeto y las circunstancias en que se produjo la conducta típica, contraviniendo con ello el principio de proporcionalidad de la pena.

Ahora bien, el precepto normativo combatido establece un sistema de sanciones que permite a la autoridad judicial individualizar suficientemente la pena que decrete. Por ello, se estima que las penas previstas para la conducta delictiva, no pueden considerarse desproporcionadas, porque la ley cuestionada sí señala bases suficientes para que el juzgador pueda tener elementos

para individualizar la pena; especialmente porque permite establecer su determinación en relación con la responsabilidad del sujeto infractor, pues para tal efecto, debe considerar los elementos que para su individualización prevé la ley penal, aplicables a la citada legislación extrapenal (Ley General de Salud). Por lo anterior, el artículo 467 Bis de dicha legislación, no resulta contrario al artículo 22 de la Constitución Federal.

III. Finalmente, el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, no contraviene el derecho a la salud establecido en el artículo 4o., cuarto párrafo, constitucional, así como el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo de San Salvador.

El artículo cuarto constitucional al establecer: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...", deriva una serie de estándares jurídicos de gran relevancia, al respecto es procedente mencionar que el Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que desarrollan esos mínimos, en términos del contenido y alcance jurídico mínimo consensuado.

Así bien, contrario a lo manifestado por la parte actora, el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, no sólo no vulnera el derecho a la salud, sino que encuentra clara justificación en éste, pues la penalización de la venta o suministro de sustancias psicotrópicas a menores de edad o incapaces, busca proteger el derecho a la salud.

Lo anterior se evidencia claramente en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto presentada el cuatro de octubre de dos mil once, así como en el dictamen de la Comisión de Salud de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

En este sentido, se desprende que el establecimiento de la pena de prisión de siete a quince años, para quienes venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, sustancias psicotrópicas, encuentra clara justificación en el derecho a la salud, por lo que no lo vulnera en forma alguna.

OCTAVO.—Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil catorce, quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud y la Constitución Federal, así como diversos tratados internacionales.

Por unanimidad de nueve votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando primero.

SEGUNDO.—**Oportunidad.** El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,[3] dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Por unanimidad de nueve votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando segundo.

El "Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 220 y un artículo 467 Bis a la Ley General de Salud", se publicó el cuatro de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, tal como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado en la foja 28 del expediente. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del jueves cinco de diciembre al viernes tres de enero de dos mil catorce.

En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja veinticinco del expediente, la demanda se presentó el jueves dos de enero de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, es evidente que la presentación de la demanda es oportuna.

TERCERO.—**Legitimación.** A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Por unanimidad de nueve votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando tercero.

---

[3] "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. …"

El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por el procurador general de la República, en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

En el caso concreto, Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, suscribe la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 467 Bis de la Ley General de Salud. Tal carácter lo acredita con la copia simple de su designación en ese cargo, en virtud de la constancia firmada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, donde se le comunica que, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil doce, con ratificación del Senado de la República lo designó como procurador general de la República.[4]

Además, es un hecho notorio para este Alto Tribunal que efectivamente el citado funcionario es el procurador general de la República. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 74/2006,[5] de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO."

No pasa desapercibido para este Tribunal Pleno, que **el diez de febrero de 2014 se reformó** el artículo 105, fracción II, **inciso c)**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo ahora que tiene legitimación "**el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas**"; asimismo, **se adicionó el inciso i)** para señalar que también tiene legitimación "**el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia**

[4] Página 26 del expediente.

[5] Novena Época. Pleno. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de contenido: "Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento."

penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones."[6]

No obstante lo anterior, debe precisarse que el artículo décimo sexto transitorio[7] de la aludida reforma constitucional, establece específicamente que las adiciones y reformas al artículo 105, fracciones II, incisos c) e i), **entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión** necesarias por virtud de las adiciones, reformas, **siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República**.

Por lo que, **al no haber sido emitida aún la ley relativa** a la Fiscalía General de la República y, por ello, tampoco haberse hecho la declaratoria correspondiente, **es evidente que sigue en vigor el anterior inciso c) de la fracción II del artículo 105**.

En consecuencia, el procurador general de la República cuenta con legitimación para acudir, como promovente de este medio de control constitucional.

---

[6] "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"…
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"…
"c) El Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
"…
(Adicionado, D.O.F. 10 de febrero de 2014)
"i) El fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones."

[7] "Décimo sexto. Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del procurador general de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al fiscal general de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, **entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República**.
"El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo."

Por unanimidad de nueve votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando cuarto.

CUARTO.—**Causas de improcedencia.** En virtud de que en este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez hechos valer por el accionante.

Por mayoría de seis votos se aprobaron las razones contenidas en el considerando quinto, en cuanto a la declaración de invalidez del artículo 467 Bis de la Ley General de Salud –en la porción normativa que remite a la fracción IV del artículo 245 de dicho ordenamiento–, adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2013.

QUINTO.—**Estudio de fondo.** Por cuestión de método en primer lugar se analizarán los conceptos de invalidez primero y tercero, en los que el procurador general de la República aduce que:

El artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, al remitir al listado contenido en la fracción IV del artículo 245 de la propia ley, viola los derechos de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, contenidos en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; pues dicho precepto remite a un listado de sustancias psicotrópicas entre las que se encuentran sustancias que sirven para el tratamiento de diversos padecimientos, cuya venta y suministro sí están permitidos, conforme lo señalado en el artículo 252 de la Ley General de Salud, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por el citado ordenamiento.

Señala que en este sentido, el precepto que ahora se combate es violatorio del derecho fundamental de seguridad jurídica, al crear confusión en los destinatarios de la norma, pues no se tiene la certeza sobre si la venta y suministro de las sustancias enumeradas en la fracción IV ya mencionada, están permitidas o vedadas. Que en el caso de personas menores de edad o incapaces, puede ser que, por prescripción médica, requieran de tratamiento de diversos padecimientos, como obesidad, psicosis, antidepresivos, tratamiento contra migraña, sedantes, entre otros. Por tanto, no es posible determinar si prevalece lo dispuesto en el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, que establece una prohibición absoluta.

Por lo que, no sólo genera inseguridad jurídica al destinatario de la norma, sino que permite la discrecionalidad del juzgador para tener por actualizada o no la conducta delictiva, en contravención al principio de exacta aplicación en materia penal, pues el legislador federal estableció una prohibición absoluta en relación con la venta o suministro a menores o incapaces, sin observar que no en todos los casos y proporciones o concentración, se ocasionan los problemas sanitarios que el legislador buscó prevenir y evitar.

Por otra parte, en su tercer concepto de invalidez, aduce que dicho precepto al remitir al listado de la fracción IV viola el derecho a la salud

contenido en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Federal, así como el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 10 del Protocolo de San Salvador; pues prohíbe la venta o suministro a menores de edad o incapaces de las sustancias enumeradas en la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud, a pesar de que se emplean en diversos medicamentos y sirven para dar tratamiento médico a varios padecimientos psicológicos o como sedantes o estimulantes, entre otros usos. Y ninguna de esas sustancias se encuentran en la composición de inhalantes y solventes, los cuales fueron objeto de discusión en el proceso legislativo que culminó con la adición del precepto impugnado.

Así se viola el derecho a la salud al no prever excepción alguna (como podría ser el consumo con fines medicinales) para los menores e incapaces, la norma pasa por alto que la clasificación de estas sustancias se realizó precisamente atendiendo a su valor terapéutico.

Ahora bien, a efecto de analizar los planteamientos mencionados es necesario analizar los principios de seguridad jurídica y taxatividad consagrados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; proporcionalidad y razonabilidad jurídica contenidos en los artículos 18 y 22 constitucionales. Así como el derecho a la salud establecido en el artículo 4o. de la propia Norma Fundamental, conforme a lo siguiente:

I. Principio de seguridad jurídica

El contenido del enunciado constitucional que se afirma como vulnerado por la norma que se tilda de inconstitucional, es del tenor siguiente:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"**En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.**

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

Al respecto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes, ha sostenido que el contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide propiamente con el denominado principio de legalidad de los delitos y las penas, frecuentemente expresado mediante el aforismo *nullum crimen, nulla poena, sine lege*.

Se trata, por tanto, de que el Estado actúe con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, pero también de que los ciudadanos conozcan en todo momento cuáles serán las consecuencias de su conducta y el modo en que dichas consecuencias les van a ser aplicadas, *con la absoluta seguridad* de que si la ley no las establece, nunca podrán afectarles.

Ahora bien, para que realmente la ley cumpla con la función de establecer cuáles son las conductas punibles debe hacerlo de forma clara y concreta, sin acudir a términos excesivamente vagos que dejen en la indefinición el ámbito de lo punible. *La vaguedad de las definiciones penales, además de privar de contenido material al principio de legalidad, disminuye o elimina la seguridad jurídica exigida por el orden constitucional*.

Por lo que atañe al principio de exacta aplicación de la ley en materia penal es de señalarse que es en atención a que **el gobernado debe tener pleno conocimiento de cuándo su conducta (acción u omisión) daña un bien jurídico protegido por el sistema penal y que puede ubicarse en la hipótesis prevista en un tipo penal, con la consecuente sanción a la que se hará acreedor**, por ello se considera de suma importancia que el legislador establezca con exactitud la conducta que estima dañina, ya que en caso contrario, no sólo en el gobernado, sino en las propias autoridades encargadas de aplicar la norma penal, se crearía la incertidumbre en cuanto al encuadramiento o enmarcamiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley.

De conformidad con la disposición constitucional antes mencionada, se establecen como garantías específicas, por una parte, que no podrá considerarse delictuoso un hecho sino por expresa declaración de la ley –*nullum crimen sine lege*– y, por la otra, que para todo delito la ley debe señalar con precisión la pena correspondiente, ya que dicho precepto prohíbe aplicar una sanción si no existe disposición legal alguna que expresamente la imponga por la comisión de un hecho determinado que esté considerado como delito.

De aquí deriva que el principio de legalidad en materia penal tiene como razón de ser, el permitir la defensa de los particulares que en un momento

determinado se coloquen en los supuestos de un tipo penal, entendido éste como la descripción que se hace en la ley de una conducta que se considera delictuosa.

En este sentido, las figuras típicas son las que delimitan los hechos punibles, razón por la que en las descripciones del injusto que acotan y recogen, el legislador debe armonizar la seguridad jurídica y la tutela de los intereses vitales, que hacen posible la justicia y la paz social, para lo cual puede integrar aquéllas con elementos externos, subjetivos y normativos inherentes a las conductas antijurídicas; que de realizarse funden los juicios de reproche sobre sus autores y la imposición de penas, previa y especialmente establecidas, por tanto, el tipo penal es un instrumento legal necesario que es de naturaleza predominantemente descriptiva, cuya función es la individualización de conductas humanas penalmente sancionables.

Por otra parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que, el alcance de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, tutelada por el artículo 14 constitucional, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito, a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador.[8]

II. El principio de taxatividad que rige en la formulación legislativa de las normas de carácter penal.

Siguiendo en la misma línea de los principios que se contiene en el artículo 14 de la Constitución Federal, transcrito, debe precisarse que, de acuerdo

[8] Jurisprudencia de la Primera Sala que es del siguiente tenor: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.—El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa." (Novena Época. Registro digital: 175595. Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, marzo de 2006, materias constitucional y penal, tesis 1a./J. 10/2006, página 84)

con la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de tal forma que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. Asimismo, se ha sostenido que la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas. Y finalmente, ha sostenido que las leyes que deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado.[9]

Al respecto, es importante recordar lo señalado por este Tribunal Pleno al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2011, en la que sostuvo que las normas jurídicas son expresadas mediante enunciados lingüís-

[9] El análisis anterior se encuentra en la tesis aislada P. IX/95, del Tribunal Pleno. Tesis publicada en la página 82 del Tomo I, correspondiente a mayo de 1995, materias penal y constitucional, Novena Época, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA.—La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, no se circunscribe a los meros actos de aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República."
Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 10/2006, dictada por esta Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 84, del Tomo XXIII, correspondiente a marzo de 2006, materias constitucional y penal, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR.—El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa."

ticos que conocemos como disposiciones. Así, el acto legislativo es un proceso complejo mediante el que los deseos del soberano son expresados en las disposiciones normativas que serán dirigidas a sus destinatarios con el fin de guiar su conducta de acuerdo con esos deseos, lo cual se logra con la obediencia de la norma. En el caso de las normas de carácter obligatorio, el soberano expresa un deseo adicional; una sanción para el destinatario que no cumpla con ese deseo.

En materia penal, existe una exigencia de racionalidad lingüística que es conocida precisamente como **principio de taxatividad**. Este principio constituye un importante límite al legislador penal en un Estado democrático de derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la **certeza jurídica** y la **imparcialidad en la aplicación del derecho**.[10] Se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales.[11] En otros términos, el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen **las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas**.[12]

Comúnmente se entiende al principio de taxatividad como una de las tres formulaciones del **principio de legalidad**, el cual abarca también los principios de no retroactividad y reserva de ley. Así, el principio de legalidad queda integrado de la siguiente manera: 1) *nullum crimen sine lege stricta* o *sine lege certa* (principio de taxatividad); 2) *nullum crimen sine lege previa* (principio de no retroactividad) y 3) *nullum crimen sine lege scripta* (principio de reserva de ley).[13]

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recoge este principio en su artículo 14, que establece, que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

---

[10] Véase, Ferreres Comella, Víctor, "El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia", Civitas, Madrid, 2002, página 21.
[11] Véase, Moreso, José Juan, "Principio de Legalidad y Causas de Justificación (Sobre el alcance de la taxatividad)", Doxa. Cuadernos de filosofía del derecho, número 24, Universidad de Alicante, 2001, página 527.
[12] Véase, Ferreres Comellas, Víctor, "El principio de taxatividad en materia penal…". *Op. Cit.*, página 21.
[13] Véase, Moreso, José Juan, "Principio de legalidad y causas …". *Op. Cit.*, página 525.

La precisión de las disposiciones es una cuestión de grado;[14] por ello, lo que se busca con este tipo de análisis, no es validar las normas si, y sólo si, se detecta la **certeza absoluta** de los mensajes del legislador, ya que ello es lógicamente imposible, sino más bien, lo que se busca es que el grado de imprecisión sea razonable, es decir, que el precepto sea lo **suficientemente preciso** como para declarar su validez, en tanto se considera que el mensaje legislativo cumplió esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma.[15]

---

[14] Al respecto, señala Víctor Ferreres: "Ahora bien … la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado. La precisión y la imprecisión constituyen los extremos de un continuo en el que existen infinidad de grados. No es fácil determinar a partir de qué zona del continuo hay que considerar la imprecisión deja de ser 'tolerable' y pasa a ser 'excesiva' … Como la precisión o imprecisión se predica finalmente del precepto enjuiciado, ocurrirá entonces lo siguiente: a) Si se concluye que el precepto es suficientemente preciso, se considerara que es constitucionalmente válido (a los efectos del test de taxatividad), aunque se presenten algunos casos dudosos. 2) Si, por el contrario, se concluye que el precepto es demasiado impreciso, se reputará constitucionalmente inválido y, en consecuencia, no se podrá aplicar a ningún caso, aunque se trate de un caso claro". Véase, Ferreres Comella, Víctor, "El principio de taxatividad..." *Op. Cit.*, página 120.

[15] En este mismo sentido, esta Primera Sala ha redefinido la taxatividad en el siguiente criterio aislado: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.—El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especia-

Sin embargo, el otro extremo sería la imprecisión excesiva o irrazonable, es decir, un grado de indeterminación tal que provoque en los destinatarios confusión o incertidumbre por no saber a ciencia cierta cómo actuar ante la nueva norma jurídica; la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del derecho, se insiste, son los valores subyacentes al principio de taxatividad.

De esta manera, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[16] ha señalado que la aplicación exacta de la ley penal exige que las disposiciones normativas sean claras y precisas, pues de no ser así se podría arribar a tal incertidumbre que conllevaría a no poder afirmar (o negar) la existencia de un delito o pena en la ley; por tanto, a no poder determinar si se respeta (o se infringe) la exacta aplicación de la ley penal.

En este sentido, es claro que el derecho humano de exacta aplicación de la ley en materia penal, se puede advertir una vertiente consistente en un mandato de "taxatividad"; los textos que contengan normas sancionadoras deben describir claramente las conductas que están regulando y las sanciones penales que se puedan aplicar a quienes las realicen.[17]

Sin embargo, habrá que aclarar que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación suficiente, y no a la mayor precisión imaginable; a cualquier precio no se puede exigir una determinación máxima. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz consistente en que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión qué conductas están prohibi-

---

lizada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas." (Tesis número 1a. CXCII/2011, emitida por la Primera Sala, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, página 1094.) Amparo en revisión 448/2010. 13 de julio de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

[16] Precedente: Amparo directo en revisión 3266/2012. Resuelto en sesión de 6 febrero de 2013. Aprobado por unanimidad de 5 votos. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

[17] Asimismo, se ha identificado que la vulneración a la exacta aplicación de la ley penal (en su vertiente de taxatividad) podría vulnerar otros derechos fundamentales en los gobernados. No sólo se vulneraría la seguridad jurídica de las personas (al no ser previsible la conducta: incertidumbre), sino que se podría afectar el derecho de defensa de los procesados (ya que sería complicado conocer qué conducta es la que se atribuye), y se podrían posibilitar arbitrariedades gubernamentales por parte de los aplicadores de las disposiciones (legalidad o igualdad jurídica).

das y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas; la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es gradual.[18]

En este sentido, se puede esclarecer una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretados para adquirir mejores contornos de determinación: como la legislación penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o profesión (y, por ello, necesitados de concreción) entonces el legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una mayor concreción.

Para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe efectuarse teniendo en cuenta únicamente el texto de la ley, sino que se puede acudir (i) tanto a la gramática, (ii) como en contraste (u observando) dicha expresión en relación con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa. Incluso, la Primera Sala de este Alto Tribunal ha ido más allá al considerar imprescindible atender (iii) al contexto en el cual se desenvuelven las normas, (iv) y a sus posibles destinatarios.[19]

Cabe apuntar que ante dichas formulaciones del principio de legalidad en materia penal, deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento exacto entre los componentes de una hipótesis delic-

---

[18] Véase al respecto, el estudio de Víctor Ferreres Comella. *El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia*. *Una perspectiva constitucional*, Madrid, Civitas, 2002, página 21 y ss.

[19] La legislación no sólo debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella, sino también se debe atender al contexto en que se desenvuelven las normas (para observar si dentro del mismo se puede tener un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento). En cuanto a los puntos (iii) y (iv), en sentido idéntico ya se ha pronunciado esta Primera Sala en las consideraciones del amparo en revisión 448/2010, en sesión de trece de julio de dos mil once. Y en un sentido similar en la jurisprudencia 1/2006, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, página 537, cuyo rubro es: "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS."; así como: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS.", Registro digital: 160794. Décima Época. Instancia: Primera Sala. Tesis aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, materia constitucional, tesis 1a. CXCII/2011 (9a.), página 1094.

tiva descrita en la ley, y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.

La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un Estado democrático de derecho.

Conforme al principio de legalidad en materia penal, no existe pena ni delito sin ley que los establezcan, de modo que, para que una conducta o hecho determinado pueda ser considerado como delito y que por ello deba ser motivo de aplicación de una pena, es indispensable una ley que repute ese hecho o conducta como tal.

Principio de referencia del que se deriva la formulación de taxatividad, que exige la formulación de términos precisos del supuesto de hecho de las normas penales, a partir de dos directrices: a) la reducción de vaguedad de los conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos; y, b) la preferencia por el uso descriptivo frente al uso de conceptos valorativos.[20]

Lo que no es otra cosa que la exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, que la descripción típica no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación, pues para garantizar el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, ésta debe ser exacta, y no sólo porque a la infracción corresponda una sanción, pues sucede que las normas penales deben cumplir una función motivadora en contra de la realización de delitos, para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad, pues no se puede evitar aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza.

En consecuencia, la formulación de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. De manera que esta exigencia no se circunscribe a los meros actos de aplicación de encuadrar la conducta en la descripción típica, sino que

---

[20] Moreso, José Juan, *Op. Cit.* página 527.

abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe quedar redactada de forma tal, que los términos mediante los cuales especifiquen los elementos respectivos sean claros y exactos. Lo anterior, implica que al prever las penas **la autoridad legislativa** no puede sustraerse del deber de describir las conductas que señalen como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación, o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza resultará violatoria de la garantía indicada.

III. Principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica que deben observar las leyes penales

Al respecto es pertinente precisar el contenido del séptimo párrafo del artículo 18 y del primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, que a la letra indican:

"Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

"...

"Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. **Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada** y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. ..."

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. **Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado**. ..."

Al respecto este Tribunal Pleno ha sostenido que el legislador tiene un amplio margen de libertad configuradora para crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados. Todo ello de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social.

En tal sentido, el legislador penal está facultado para emitir leyes que inciden en los derechos fundamentales de los gobernados (libertad personal; derecho a la propiedad, por ejemplo), estableciendo penas para salvaguardar diversos bienes –también constitucionales– que la sociedad considera valiosos (vida, salud, integridad física, por ejemplo).

Sin embargo, las facultades del legislador no son ilimitadas. La legislación penal no está exenta de control constitucional.

Es cierto que los derechos humanos encuentran su límite, en ocasiones, en el interés público y en los derechos humanos de terceros.

Sin embargo, ese hecho no conduce a determinar que los derechos humanos siempre deban ceder –en todo momento y en relación a todo su contenido– frente al interés público o a los intereses constitucionales de terceros que determine el legislador.

En este tenor este Tribunal Pleno ha sostenido que si la Constitución admite restricciones de un derecho humano por medio de la ley, el legislador –en su carácter de poder constituido– debe dejar intacto el derecho constitucional respectivo en su núcleo.

En el momento en el que el legislador se estime facultado para disponer absolutamente del contenido y eficacia de los derechos humanos, ello conducirá a la posibilidad de que un poder constituido pueda sobreponerse al contenido axiológico y material de la Constitución Federal.

Precisamente, uno de los caracteres esenciales de los derechos humanos, se traduce en su capacidad de operar como límite a las decisiones mayoritarias (sea bajo la denominación de interés público o de derechos constitucionales de terceros). A ese respecto, cobran relevancia los conceptos de contenido esencial y proporcionalidad constitucional.

Dichos conceptos implican la idea de que el legislador bien puede limitar los derechos humanos con base en la Constitución, siempre que lo haga de manera justificada, es decir, estableciendo una relación de proporcionalidad entre los medios y los fines que pretende alcanzar a través de la medida de intervención respectiva.

Del sistema jurídico mexicano, el principio de proporcionalidad puede deducirse del Texto Supremo, básicamente como exigencia del principio de legalidad; de la prohibición constitucional que exige al legislador no actuar en exceso de poder o de manera arbitraria.

Esto es así, porque la Norma Fundamental, al mismo tiempo que permite la restricción legislativa de los derechos para salvaguardar otros bienes constitucionales, también permite el control judicial de las leyes, de lo que se deduce, por una parte, que la Norma Suprema impide al legislador que se exceda en sus facultades de desarrollo de tales derechos y, por otra, que la Constitución reconoce a todas ellas un contenido esencial inherente que no puede aniquilar ningún poder constituido (incluido el legislador).

Tales criterios ponen de manifiesto, que el legislador está autorizado para desarrollar los límites constitucionales de los derechos humanos y para reglamentar sus posibles conflictos; sin embargo, dicha actividad está condicionada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, tomando en cuenta que existe la imposibilidad de que una ley secundaria nulifique injustificadamente el contenido de cualquiera de esos derechos en pugna, máxime que éstas son de superior entidad y jerarquía normativa.

En ese orden de ideas, este tribunal encuentra que –tratándose de la reglamentación de los conflictos entre normas constitucionales– el legislador debe actuar de manera acorde a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.

De la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, entendida desde un punto de vista integral, se desprende que el cumplimiento de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, implica que la limitación de un derecho humano por parte del legislador: a) debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) debe ser adecuada, idónea, apta, susceptible de alcanzar la finalidad constitucional perseguida por el legislador a través de la limitación respectiva; c) debe ser necesaria, es decir, suficiente para alcanzar la finalidad constitucionalmente legítima, de tal forma que no implique una carga desmedida e injustificada para el gobernado respectivo; y d) debe ser razonable, de tal forma que cuanto más intenso sea el

límite del derecho, mayor debe ser el peso o jerarquía de las razones constitucionales que justifiquen dicha intervención.

Tanto el Pleno, como las dos Salas de este Alto Tribunal, han operado con base en los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica tratándose del examen de la constitucionalidad de medidas legislativas limitadoras de los derechos humanos.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del País, que enseguida se transcribe:

"GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA.—De los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los gobernados." (No. Registro digital: 170740. Jurisprudencia. Materia constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis P./J. 130/2007, página 8)

Así, de conformidad con el principio de legalidad constitucional, el legislador penal debe actuar de forma medida y no excesiva, al momento de regular las relaciones en ese ámbito, porque su posición como poder constituido dentro del Estado constitucional le impide actuar de forma arbitraria y en exceso de poder.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, encuentra que el legislador en materia penal tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal; es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo a las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes penales debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad

del ser humano, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Federal.

Apoya lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia:

"LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA.—El legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes relativas debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, el Juez constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado." (Novena Época. Núm. Registro digital: 168878. Pleno. Jurisprudencia. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, tesis P./J. 102/2008, página 599)

IV. Derecho a la salud

Una vez precisado lo anterior, conviene hacer alusión al derecho a la salud que el promovente también considera que el tipo penal impugnado vulnera; conforme a los alcances ya señalados por este Alto Tribunal en diversos precedentes:

La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad de este derecho se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos.

El derecho a la salud está consagrado en el artículo 4o. constitucional[21] y en numerosas normas de derecho internacional,[22] tales como el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual contiene una de las expresiones más exhaustivas del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. Además, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y en el artículo 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; así como en el artículo 24 de la Convención Sobre los Derechos del Niño.

Asimismo, varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social Europea en su forma revisada (artículo 11), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 16), y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 10), también reconocen el derecho a la salud. Análogamente, este derecho ha sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de mil novecientos noventa y tres, y en otros instrumentos internacionales.

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General 14, ha señalado respecto al derecho a la salud que:

"El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de

---

[21] "**Artículo 4o.** El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
"…
"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución …"

[22] Las cuales aun cuando no se tienen en cuenta como parte de la premisa normativa del razonamiento judicial, conviene tener en cuenta como marco de referencia.

protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud."[23]

En este orden de ideas, puede hablarse de diversos derechos derivados de lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional y los tratados internacionales mencionados, entre los que destacan: 1) en principio, el Estado tiene la obligación de prevenir la existencia de enfermedades; y 2) cuando no se ha podido prevenir la enfermedad, el Estado está obligado a garantizar el tratamiento y, en el caso de que el padecimiento lo permita, la rehabilitación del enfermo, para lo cual no puede obstaculizarla. Esto implicaría que como parte del derecho a la salud se debe entender que un enfermo tiene el derecho a ser tratado de conformidad con su dignidad personal, pues de lo contrario no se lograría su rehabilitación, violándose así el contenido básico del propio derecho.

En este aspecto, la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la lucha contra ellas [apartado c) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] exigen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento y se promuevan los factores sociales determinantes de la buena salud, como la seguridad ambiental, la educación, el desarrollo económico y la igualdad de género.

Por otro lado, el derecho a tratamiento (rehabilitación) comprende la creación de un sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. La lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas, pero en ningún caso, la prevención, tratamiento y lucha de enfermedades puede utilizar como vía para lograr sus fines el derecho penal, por compleja o estigmatizada que sea la enfermedad por su relación con el comportamiento del individuo.

Al respecto, como consideraciones adicionales, debe precisarse, que aun cuando en ocasiones suele justificarse por los Estados la utilización de las cuestiones relacionadas con la salud pública para sustentar la limitación del ejercicio de otros derechos fundamentales, el Comité de Derechos Económicos,

---

[23] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14, párrafo 8.

Sociales y Culturales ha señalado de manera reiterada que, la cláusula limitativa que establecen diversos tratados de derechos humanos, para restringir o limitar el ejercicio de algunos derechos, tiene más bien por objeto proteger los derechos de los particulares, y no permitir la imposición de limitaciones por parte de los Estados.

Análisis concreto de la constitucionalidad de la norma penal cuestionada. Establecida la base conceptual de los postulados constitucionales con los cuales debe confrontarse el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, resulta necesario tener presente el contenido de dicha disposición, que establece:

"Artículo 467 Bis. **Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma**, sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones **IV** y V del artículo 245 de esta ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión."

En principio, es importante precisar que del análisis integral del escrito de presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, se advierte que el procurador general de la República impugna la constitucionalidad del precepto transcrito **únicamente en la parte que remite a la fracción IV del artículo 245 de la propia ley**, sin que aduzca argumento alguno respecto de la remisión a la fracción V del último precepto invocado; por tanto, el presente análisis únicamente se referirá a la inconstitucionalidad planteada.

Por otra parte, el análisis dogmático del delito en cuestión puede realizarse del siguiente modo:

A. Elementos objetivos:

1. Conducta: Es un delito de acción, pues se trata de "vender o suministrar" las sustancias se refiere la fracción IV del artículo 245 de esa ley.

2. Resultado: Es un delito de peligro, pues no es necesario que se acredite un daño, alteración en la salud de los sujetos pasivos.

3. Sujeto activo: Cualquier persona, el tipo penal no requiere una calidad específica.

4. Sujeto pasivo: Menores de edad e "incapaces" a quienes se les suministren o vendan las sustancias en comento.

5. Objeto material: Las sustancias se refiere la fracción IV del artículo 245 de esa ley.

6. Bien jurídico tutelado: La salud de los menores de edad e "incapaces".

7. Medios de comisión: El suministro y la venta.

8. Circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión: No las exige el tipo penal.

B. Elementos normativos de valoración:

i. Cultural: Los conceptos de venta y suministro.

ii. Legal: Los conceptos de "menores de edad", "incapaces" y sustancias a que se refiere la fracción IV del artículo 245 de la ley.

iii. Científica: La determinación del tipo de sustancia.

C. Elementos subjetivos: El delito puede ser dolo o culposo al no exigir un elemento específico.

Ahora bien, como se ha señalado a efecto de determinar el contenido prohibitivo del precepto impugnado debe analizarse el contenido del contexto normativo al que pertenece, para tal efecto es necesario hacer referencia al artículo 245, fracciones IV y V, de la Ley General de Salud, al que remite la propia norma, así como al artículo 252 de la citada ley general, con la cual –señala el procurador– tiene relación el precepto, los cuales dicen:

"Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

"I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: (véase archivo anexo)

"Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga.

"II. Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un problema grave para la salud pública, y que son:

"...

"III. Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la salud pública, y que son:

"...

"IV. **Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son**:

"Gabob (ácido gamma amino beta hidroxibutirico)

"Alobarbital

"Amitriptilina

"Aprobarbital

"Barbital

"Benzofetamina

"Benzquinamina

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)

"Biperideno

"Buspirona

"Butabarbital

"Butalbital

"Butaperazina

"Butetal

"Butriptilina

"**Cafeína**

"Carbamazepina

"Carbidopa

"Carbromal

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994)
"Certalina

"Clorimipramina clorhidrato

"Cloromezanona

"Cloropromazina

"Clorprotixeno

"Deanol

"Desipramina

"Ectilurea

"Etinamato

"Fenelcina

"Fenfluramina

"Fenobarbital

"Flufenazina

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)
"Flumazenil

"Haloperidol

"Hexobarbital

"Hidroxicina

"Imipramina

"Isocarboxazida

"Lefetamina

"Levodopa

"Litio-carbonato

"Maprotilina

"Mazindol

"Mepazina

"Metilfenobarbital

"Metilparafinol

"Metiprilona

"Naloxona

"Nor-pseudoefedrina (+) catina

"Nortriptilina

"Paraldehido

"Penfluridol

"Pentotal sodico

"Perfenazina

"Pipradrol

"Promazina

"Propilhexedrina

(Adicionada, D.O.F. 26 de julio de 1995)
"Sertralina

"Sulpiride

"Tetrabenazina

"Tialbarbital

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, d.o.f. 26 de julio de 1995)
"Tiopental

"Tioproperazina

"Tioridazina

(Republicada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)
"Tramadol

(F. de E., D.O.F. 18 de febrero de 1988)
"Trazodone

(Adicionada, D.O.F. 24 de octubre de 1994) (Republicada, D.O.F. 26 de julio de 1995)
"Trazolidona

"Y sus sales, precursores y derivados químicos

"Trifluoperazina

"Valproico (acido)

"Vinilbital.

"V. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes."

"**Artículo 252. Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley**, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, **requerirán, para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta, las primeras dos veces**."

De los preceptos transcritos, en lo que interesa, se desprende que el precepto impugnado **penaliza** con prisión de siete a quince años **a quien venda o suministre a menores de edad o "incapaces", mediante cualquier forma**, entre otras, las sustancias psicotrópicas **que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública**, que se enlistan en la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud, entre las que destaca la cafeína.

Sin embargo, la propia ley general establece que **precisamente esas sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, pueden ser vendidas y suministradas al público en general**, siempre y cuando cumplan con el requisito de presentar la receta médica correspondiente, que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida; precisándose incluso que dichas sustancias podrán surtirse hasta por tres veces con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta, las primeras dos veces. Prescripciones que son acordes con las características de dichas sustancias establecidas en la propia Ley General de Salud, en el sentido de **que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública**.

De lo anterior, se advierte que asiste la razón al procurador general de la República, pues la norma impugnada **genera incertidumbre jurídica** que impide que los ciudadanos conozcan *con la absoluta seguridad* la conducta prohibida, esto es, que el gobernado no puede tener pleno conocimiento de cuándo su conducta daña el bien jurídico tutelado por la norma y en qué caso puede ubicarse en la hipótesis prevista en un tipo penal, con la consecuente sanción a la que se hará acreedor; lo cual, como se ha precisado resulta de suma importancia ya que es deber del legislador establecer con exactitud la conducta que estima dañina, ya que en caso contrario, no sólo en el gobernado, sino en las propias autoridades encargadas de aplicar la norma penal, se crearía la incertidumbre en cuanto al encuadramiento o enmarcamiento de la conducta que realiza el sujeto activo en la descripción establecida en la ley.

En efecto, como ha quedado de manifiesto, la misma conducta, en una cierta condición, es penalizada, es sancionada y, en otra, es permitida sobre la base de un requisito que es la venta a través de una receta médica; esto es, el suministro y venta de las sustancias aludidas se permiten bajo una cierta condición. Así, según lo que establece la propia ley general una misma conducta es considerada como una conducta prohibida, es decir, antijurídica y, por otro lado, como permitida haciéndola lícita; con lo que no existe claridad respecto a si en realidad esa conducta es o no sancionable por el orden jurídico nacional.

Así **se vulnera el principio de seguridad jurídica**, pues el artículo 14 constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador.

En ese mismo tenor, la norma resulta violatoria del principio de taxatividad, dado que **al penalizar de manera general e indiscriminada la venta y suministro a menores de edad o "incapaces"** de las sustancias psicotrópicas que se precisan en la fracción IV del artículo 245 de la ley general en comento, choca con las estipulaciones específicas de la propia normatividad, en cuanto permite la venta y suministro de dichas sustancias siempre y cuando se presente la receta médica correspondiente, lo que genera confusión respecto del núcleo mismo del tipo penal, es decir, la conducta que está prohibida.

Lo que, en primer lugar, no permite saber a ciencia cierta al gobernado cuál es la conducta que debe evitar por estar sancionada con una pena privativa de libertad y, por otra parte, da lugar a la subjetividad en la aplicación que realicen las autoridades investigadoras y juzgadoras. Lo que evidentemente contraviene al deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales, es decir, la exigencia de que los textos en los que se recogen **las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas**.

Debe precisarse que, este Tribunal Pleno ha sostenido que si bien es cierto que al realizar el análisis de constitucionalidad de disposiciones generales, es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda a la interpretación conforme, e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las imprecisiones u omisiones que generan la inconstitucionalidad, también lo es que, el empleo de dichas prácticas interpretativas es inadmisible en materia penal, en atención a las particularidades del principio de legalidad en esta rama jurídica, como son: a) Reserva de ley, por virtud del cual, los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y material; b) La prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia, leyes que crean delitos o aumenten penas); y, c) El principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos.

Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio, aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso.

Dicho criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia de este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA."[24]

Por otra parte, la norma impugnada, también **vulnera los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica**, ya que si bien la norma persigue un fin constitucionalmente válido, lo cierto es que, el medio empleado no es adecuado ni idóneo para alcanzar la finalidad constitucional perseguida por el legislador, así como tampoco es razonable.

En efecto, como se advierte del proceso legislativo de la reforma que dio lugar a la norma impugnada, con la aprobación de la norma se pretendió

---

[24] Cuyos datos de identificación y texto son: Novena Época, Registro digital: 167445, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIX, abril de 2009, materias constitucional y penal, tesis P./J. 33/2009, página 1124. "Si bien es cierto que al realizar el análisis de constitucionalidad de disposiciones generales es factible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acuda a la interpretación conforme, e incluso emita resoluciones integradoras a efecto de corregir las omisiones que generan la inconstitucionalidad, también lo es que el empleo de dichas prácticas interpretativas es inadmisible en materia penal, en atención a las particularidades del principio de legalidad en esta rama jurídica, como son: a) Reserva de ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y material; b) La prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia, leyes que crean delitos o aumenten penas); y, c) El principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos. Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso." (Acción de inconstitucionalidad 157/2007. Procurador general de la República. 20 de octubre de 2008. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz, Fabiana Estrada Tena y Marat Paredes Montiel)

combatir la adicción y el consumo de sustancias inhalables con efectos psicotrópicos sobre todo en menores de edad e incapaces, a efecto de proteger el derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Federal, como se desprende del Dictamen de la Cámara de Origen, que en la parte que interesa, a la letra dice:

"... **III. Contenido de la iniciativa.**— ... imponer pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que venda sustancias inhalables con efectos psicotrópicos, a menores de 18 años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender (equiparable al delito de corrupción de menores).

"...

"**Artículo 467 Bis. Al que venda sustancias inhalables con efectos psicotrópicos, a menores de 18 años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate (equiparable al delito de corrupción de menores)**.

"...

"**V. Consideraciones**

"**Primera.** La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o. **Toda persona tiene derecho a la protección de la salud ... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución**.

"Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

"El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que,

además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

"En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

"**Segunda.** Los estimulantes son cada vez más consumidos por todo tipo de persona. Se ha vuelto habitual el consumo de estimulantes con el objetivo de reprimir el sueño y reavivar las energías. Muchas personas con una incesante vida laboral o de estudios, acuden a los estimulantes para poder soportar y responder de buena manera a sus actividades y a sus exigencias.

"No se puede decir que el consumo y el abuso de estimulantes genera una adicción directamente física, aunque si puede generar una dependencia psicológica. Los posibles riesgos de dependencia se inician, en el caso de una persona que los consuma para ser como una que los haga para cumplir con sus actividades cotidianas, es el hecho de poder cumplir dichos objetivos sin el consumo de la droga.

"Una sustancia psicotrópica o psicotropo (del griego *psyche*, 'mente'; y *tropein*, 'tornar') es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento.

"**Tercera.** Como bien es señalado en la exposición de motivos de los promoventes, más de mil productos pueden ser inhalados para obtener placer de corta duración. Los inhalables más populares entre los adolescentes entre los 12 y los 17 años son pegamento, cemento, crema de calzado, pintura, gasolina y líquido de encendedores. Otros inhalables comúnmente utilizados y fácilmente al alcance son esmalte líquido o corrector, pintura de spray , aerosol de crema para repostería y spray de cocina.

"**Cuarta.** El consumo de inhalables se volvió popular entre los adolescentes jóvenes en la década de 1970 con la 'inhalación de pegamentos'. Desde entonces, una mayor variedad de inhalables se han vuelto populares. El uso de inhalables involucra particularmente a adolescentes jóvenes o niños en edad escolar.

"Los inhalables más utilizados son, entre otros:

"• Aerosoles para desodorantes o aerosoles para el cabello

"• Líquidos para la limpieza

"• Gasolina

"• Líquido corrector de mecanografía

"Pegamentos para maquetas

"• Pinturas en aerosol

"Los efectos negativos del abuso de inhalables abarcan:
"• Daño cerebral

"2• Convulsiones

"• Daño renal o hepático

"• Daño nervioso (neuropatía periférica)

"• Muerte súbita

"**Quinta.** Diversos datos señalan que la edad promedio del primer uso de éstos son los 12 años; aproximadamente 2 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años reportan que han usado inhalables por lo menos una vez en la vida; entre 1994 y 2000, el número de nuevos consumidores aumento a más de 50 por ciento.

"De acuerdo con el análisis del Consejo Nacional contra las Adicciones, poco más de 3.5 millones de individuos de 12 a 65 años de edad de todo el país han probado alguna droga ilegal, como marihuana o cocaína, aunque en este rubro también se encuentran sustancias inhalables y las que tienen un uso médico y se consumen sin prescripción; las cifras son alarmantes, ya que hay 3.3 hombres por cada mujer que ha consumido.

"…

"**Novena.** Con relación al **artículo 467 Bis de la Ley General de Salud**, es importante aclarar que la Ley General Salud, en el **capítulo VI,** '**Sustancias psicotrópicas**', en las fracciones V y VI del artículo 245, el cual establece las sustancias psicotrópicas y su clasificación en grupos, referente al tema de inhalables que establecen:

"V. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública;

"...

"VI. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, las que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes; esto, respecto al tema de inhalables.

"Por tanto, se propone la siguiente redacción:

"**Artículo 467 Bis. Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta ley se aplicarán de 7 a 15 años de prisión.**

"**Décima.** Los integrantes de la Comisión de Salud consideran que esta reforma es de gran importancia, ya que propone dar un gran paso en el tema de inhalables, debido a la necesidad que existe para que quien venda estas sustancias psicotrópicas, que son utilizadas como inhalables, a menores de edad, a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, se les imponga una pena de prisión. Recordemos que como legisladores se tiene el compromiso de velar por los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los jóvenes y los niños.

"Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXI Legislatura someten a consideración del Pleno el siguiente proyecto de **decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de adicciones a productos inhalables**. ..."

No obstante lo anterior, se advierte que el medio empleado no es adecuado ni idóneo para alcanzar la finalidad constitucional perseguida por el legislador, así como tampoco es razonable, dado que implica una carga desmedida e injustificada para el gobernado; toda vez que debe recodarse que el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud prohíbe la venta **y el suministro** a menores de edad o incapaces, **mediante cualquier forma**, de sustancias que se encuentren comprendidas dentro de la fracción IV del artículo 245 de esa ley general, siendo que esas sustancias, si bien son psicotrópicas, lo cierto es que **tienen amplios usos terapéuticos** y constituyen un problema menor para la salud pública, de las que destaca la **cafeína**.

Por lo anterior, la norma es sobre inclusiva, en cuanto a las potenciales conductas que, en su aplicación, pudieran resultar perseguidas o castigadas; por lo que, se violentan los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la conducta regulada.

En efecto, como lo señala el promovente, las sustancias comprendidas en la fracción IV del citado artículo, son sustancias que, si bien están controladas, lo cierto es que, se emplean para la fabricación de medicamentos, que pueden ser necesarios para el tratamiento médico de menores e incapaces. Además, se destaca que, la cafeína es una de las sustancias enumeradas, la cual no sólo se emplea para la fabricación de medicamentos, sino que se encuentra en diversos productos que pueden ser legalmente suministrados a menores de edad e incapaces (como refrescos, café, té, chocolate, cafiaspirinas, ente otros).

Por lo que, se hace evidente que el hecho de que el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud sancione con una pena de prisión de siete a quince años a la persona que venda o suministre sustancias, como la cafeína, a menores o incapaces "mediante cualquier forma", es desproporcionada al no ser acorde con la finalidad pretendida que es la protección del derecho a la salud, ya que no se hace un análisis exhaustivo del grado de daño o beneficio a la salud que pueden tener cada una de las sustancias enumeradas en la fracción IV del artículo 215 de la citada ley.

Consecuentemente, la norma vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, pues si bien, como se dijo, el legislador en materia penal tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal; es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo a las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes penales, debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano.

Por último, así redactada también resulta violatoria del derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Federal, pues obstaculiza que se ejerza con libertad el derecho a controlar su salud y su cuerpo, así como incumple con su obligación de establecer un sistema de salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Ya que **en el caso de menores de edad y de personas con discapacidad**, impide que en caso de que padezcan alguna enfermedad que requiera

un tratamiento (prescrito por el médico responsable y autorizado por el Estado para ejercer tal profesión) en el que se deban incluir dichas sustancias, se les puedan proporcionar.

Por lo que, como se dijo, se incumple con la obligación del Estado de garantizar el tratamiento y, en el caso de que el padecimiento lo permita, la rehabilitación del enfermo.

Lo que resulta más grave, si se toma en consideración que precisamente las personas con alguna discapacidad son las que pueden necesitar más de algún medicamento que contenga dichas sustancias y, en el caso de los menores de edad que padezcan alguna enfermedad, como la migraña, la norma impediría que se le pudiera suministrar los medicamentos requeridos para contrarrestar tanto el mal como el dolor que se sufre, dado que como lo señala el procurador general de la República, una de las sustancias que se encuentran comprendidas en la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud, es la *cafeína*.

Siendo que precisamente es a dicho sector de la población (niños y personas con discapacidad) a quién el Estado tiene mayor obligación de proteger, al tratarse de grupos vulnerables protegidos por las normas internacionales de las que el Estado Mexicano es parte.

Sin que sea óbice, lo que aducen las Cámaras del Congreso de la Unión, en el sentido de que, lo que se pretendía, era precisamente proteger la salud de dichos sectores de la población vulnerables; debido a que dada la imprecisión y generalidad del tipo penal que finalmente se aprobó, resulta que se produce exactamente el efecto contrario.

En suma, todas las consecuencias antes enunciadas llevan a este Tribunal Pleno a concluir, de manera general, que resultan esencialmente fundados los argumentos expresados por el procurador general de la República, en los conceptos de invalidez analizados, en los que señala, respectivamente, que la norma impugnada no cumple con las garantías de legalidad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, y que es violatoria del derecho humano a la salud.

Por lo que, lo procedente es declarar la inconstitucionalidad del artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, **en la porción normativa que remite a la fracción IV del artículo 245 de la propia ley**; al ser violatorio de los diversos preceptos constitucionales señalados.

SEXTO.—**Efectos de la sentencia.** De conformidad con los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda.[25]

Asimismo, conforme al artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, esta sentencia tendrá efectos retroactivos en beneficio de las personas a las que se les haya aplicado el precepto impugnado a partir del cinco de diciembre de dos mil trece, fecha en la que entró en vigor el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud;[26] esto al tratarse de una norma en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.[27]

Así, de acuerdo con la parte considerativa de este fallo, se debe declarar la invalidez del artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil trece; **en la porción normativa que remite a la fracción IV del artículo 245 de la propia ley**. En la inteligencia de que dichos efectos se surtirán con motivo de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso de la Unión.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

---

[25] "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"…
"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."
"Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."

[26] Lo anterior, conforme al transitorio único del Decreto 296, que a la letra dice: "**Transitorio.—Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación**."

[27] "Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"**La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia**."

SEGUNDO.—Se declara la invalidez del artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, publicado en el Periódico Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil trece; **en la porción normativa que remite a la fracción IV del artículo 245 de la propia ley**, la cual será retroactiva al cinco del citado mes y año, en términos del último considerando de esta sentencia. En la inteligencia de que dichos efectos se surtirán con motivo de la notificación de los puntos resolutivos de este fallo al Congreso de la Unión.

TERCERO.—Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*.

Notifíquese; por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de nueve votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Pérez Dayán y presidenta en funciones Sánchez Cordero de García Villegas, respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.

Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y presidente Juan N. Silva Meza no asistieron a la sesión de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el primero previo aviso a la presidencia y el segundo por encontrarse desempeñando una comisión de carácter oficial.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, en contra de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, apartándose de las consideraciones alusivas al derecho a la salud, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo. Los Ministros Luna Ramos, por la invalidez exclusiva de la porción normativa que indica "mediante cualquier forma", y Franco González Salas votaron en contra. Los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz y Aguilar Morales reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. El Ministro Zaldívar Lelo de Larrea anunció voto concurrente. El Ministro Franco González Salas anunció voto particular.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Pérez Dayán y presidente Silva Meza.

El Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión de primero de diciembre de dos mil catorce previo aviso a la presidencia.

El Ministro presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Nota: La presente ejecutoria también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 23 de marzo de 2015

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular que formula el Ministro José Fernando Franco González Salas en la acción de inconstitucionalidad 2/2014, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2014.

En la acción de inconstitucionalidad citada al rubro, el procurador general de la República impugnó la constitucionalidad del artículo 467 Bis[1] de la Ley General de Salud, específicamente la remisión que en él se hace al listado contenido en la fracción IV del artículo 245,[2] de la misma ley, pues a su juicio es contraria a los derechos de se-

[1] "Artículo 467 Bis. Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión."

[2] "Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:
"…
"IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, y son:
"Gabob (ácido gamma amino beta hidroxibutirico)
"Alobarbital
"Amitriptilina
"Aprobarbital
"Barbital
"Benzofetamina
"Benzquinamina
"Biperideno
"Buspirona
"Butabarbital
"Butalbital
"Butaperazina
"Butetal
"Butriptilina

guridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal establecidos en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, considera que viola el derecho a la salud contenido en los artículos 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Federal, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo de San Salvador, pues prohíbe la venta

---

"Cafeína
"Carbamazepina
"Carbidopa
"Carbromal
"Clorimipramina clorhidrato
"Cloromezanona
"Cloropromazina
"Clorprotixeno
"Deanol
"Desipramina
"Ectilurea
"Etinamato
"Fenelcina
"Fenfluramina
"Fenobarbital
"Flufenazina
"Flumazenil
"Haloperidol
"Hexobarbital
"Hidroxicina
"Imipramina
"Isocarboxazida
"Lefetamina
"Levodopa
"Litio-carbonato
"Maprotilina
"Mazindol
"Mepazina
"Metilfenobarbital
"Metilparafinol
"Metiprilona
"Naloxona
"Nor-pseudoefedrina (+) catina
"Nortriptilina
"Paraldehido
"Penfluridol
"Pentotal sodico
"Perfenazina
"Pipradrol
"Promazina
"Propilhexedrina
"Sertralina
"Sulpiride

o suministro a menores de edad o discapacitados de las sustancias enumeradas en la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud, a pesar de que se emplean en diversos medicamentos y sirven para dar tratamiento médico a varios padecimientos psicológicos o como sedantes o estimulantes, entre otros usos, y ninguna de esas sustancias se encuentra en la composición de inhalantes y solventes, los cuales fueron objeto de discusión en el proceso legislativo que culminó con la adición del precepto impugnado.

De igual forma, argumentó que el artículo combatido transgrede lo dispuesto en el artículo 22 constitucional, pues establece una pena que no es proporcional al delito que sanciona y al bien jurídico que pretende proteger.

Al respecto, la mayoría de los Ministros que integran el Pleno consideró fundados dichos argumentos, por lo que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 467 Bis de la Ley General de Salud en la porción normativa que remite a la fracción IV del artículo 245 del mismo ordenamiento.

La decisión anterior se basó en analizar los planteamientos del accionante conforme a los principios de seguridad jurídica y taxatividad dispuestos en el artículo 14, proporcionalidad y razonabilidad jurídica contenidos en los artículos 18 y 22 y el derecho a la salud establecido en el artículo 4o, todos de la Constitución Federal.

Así, se precisó que el principio de seguridad jurídica en las normas de carácter penal consiste en la imposibilidad de sancionar una conducta o imponer pena alguna que no esté establecida en ley, lo que coincide con el principio de legalidad de los delitos y penas.

Se señaló que el alcance de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté establecida en una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que obliga al legislador a emitir normas claras en las que se precise la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito, a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador.

En cuanto al principio de taxatividad, se consideró que éste prevé como exigencia que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que el objeto de la prohibición

---

"Tetrabenazina
"Tialbarbital
"Tiopental
"Tioproperazina
"Tioridazina
"Tramadol
"Trazodone
"Trazolidona
"Trifluoperazina
"Valproico (ácido)
"Vinilbital.
"Y sus sales, precursores y derivados químicos."

pueda ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma, lo que implica que al prever las penas, el legislador debe describir las conductas con todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, a efecto de evitar confusiones en su aplicación.

Por lo que hace a los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica que deben de observar las leyes penales, se señaló que el legislador en materia penal tiene un amplio margen de libertad para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo a las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes penales debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infame, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución.

Por otra parte, el concepto del derecho a la salud se analizó desde la perspectiva y protección establecida en diversos tratados internacionales pertenecientes a los sistemas interamericano, europeo y africano de derechos humanos, así como la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas denominada "El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud", de la cual se retomó el concepto de derecho a la salud en el sentido de que no debe entenderse únicamente como un derecho a estar sano, sino que este derecho entraña diversas libertades y derechos, como el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.

A partir de lo anterior, se concluyó la obligación que tiene el Estado para prevenir la existencia de enfermedades y para garantizar, en su caso, un tratamiento adecuado que permita la rehabilitación del enfermo.

Establecido el marco conceptual referido, se precisó que el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, penaliza con prisión de 7 a 15 años a quien suministre o venda a menores de edad o incapaces las sustancias enlistadas en la fracción IV del artículo 245 del mismo ordenamiento; sin embargo, el artículo 252 de esa ley permite la venta y suministro de las referidas sustancias al público en general, siempre que se cumpla con los requisitos que ahí se señalan.

Así, a juicio de la mayoría, el artículo en comento genera incertidumbre jurídica y, por tanto, viola el principio de seguridad, ya que una misma conducta en determinada condición es sancionada y en otra es permitida, por lo cual no existe claridad respecto a si esa conducta es o no sancionable.

En consecuencia, se concluyó que viola el principio de taxatividad pues penaliza de manera general e indiscriminada la venta y suministro a menores de edad o incapaces de las sustancias psicotrópicas que se precisan en la fracción IV del artículo 245 de la ley general en comento, choca con la estipulaciones específicas de la propia normatividad, en cuanto a que permite la venta y suministro de dichas sustancias siempre y cuando se presente la receta médica correspondiente, lo que genera confusión respecto del núcleo del mismo tipo penal, es decir, la conducta que está prohibida.

Aunado a lo anterior, se sostuvo que el artículo bajo estudio también vulneraba los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, ya que si bien perseguía un fin constitucional válido, el medio empleado no era adecuado ni idóneo para alcanzar la finalidad constitucional perseguida por el legislador, además de que implicaba una carga desmedida e injustificada para el gobernado.

Finalmente, la mayoría consideró que el artículo impugnado viola el derecho a la salud, en atención a que se prohíbe absolutamente a los menores de edad y a personas con discapacidad el acceso a un tratamiento que conlleve el uso de dichas sustancias para revertir alguna enfermedad, con lo que se deja de lado la obligación del Estado de garantizar el tratamiento y la rehabilitación de las personas enfermas.

No comparto la decisión de la mayoría de los Ministros que integran el Tribunal Pleno en atención a las siguientes consideraciones:

Desde mi perspectiva, el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud no es contrario a los principios de taxatividad y tipicidad pues en él se establecieron con claridad los sujetos –al que venda o suministre a menores de edad o incapaces–, las condiciones –mediante cualquier forma, así como las sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta ley– y la sanción correspondiente –se aplicará de 7 a 15 años de prisión–; consecuentemente considero que no existe problema en relación con dichos principios.

Ahora, si bien el artículo considerado por la mayoría inconstitucional remite a un artículo en el que se establecen las sustancias que no pueden ser vendidas directamente a los menores o incapaces, en el artículo 252,[3] de la Ley General de Salud se establecieron las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, respecto a las sustancias psicotrópicas que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública; por lo cual me parece que tampoco podrían existir dudas al respecto.

Por otra parte, en cuanto a que la norma a estudio tiene un problema de sobreinclusión respecto a las potenciales conductas que en su aplicación pudieran resultar perseguidas o castigadas, lo que implica un problema de razonabilidad y de falta de proporcionalidad en la conducta regulada, en los dictámenes del proceso legislativo se advierten las explicaciones de porqué se establecieron estas medidas, cuya esencia radica en proteger a menores e incapaces de tener acceso a ciertas sustancias;[4] por

[3] "Artículo 252. Las sustancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán, para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta, las primeras dos veces."

[4] Del dictamen de la Cámara de Origen, en lo conducente se señala.
"III. Contenido de la iniciativa … Imponer pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que venda sustancias inhalables con efectos psicotrópicos, a menores de 18 años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender (equiparable al delito de corrupción de menores).

lo cual considero que tampoco podrían existir un problema de razonabilidad de la norma en cuestión.

Si bien el artículo combatido, remite a un un listado de sustancias que en cierta medida tienen un nivel de peligrosidad, considero que la razonabilidad en la decisión del legislador de incorporarlas está en que pueden tener ciertos efectos no deseados, motivo por el cual no deben ser vendidas bajo ningún supuesto directamente a menores o incapaces, lo cual no quiere decir que quienes tengan a su cargo la paternidad, tutoría o cualquier otra forma en que tengan bajo su custodia a un menor o un incapaz, no puedan ir y comprar con una receta médica aquello que pudiera ser útil para la atención de la salud del menor o incapaz.

"…
"Artículo 467 Bis. Al que venda sustancias inhalables con efectos psicotrópicos, a menores de 18 años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate (equiparable al delito de corrupción de menores).
"…
"V. Consideraciones
"Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.: 'Toda persona tiene derecho a la protección de la salud …' y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
"Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.
"El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.
"En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.
"Segunda. Los estimulantes son cada vez más consumidos por todo tipo de persona. Se ha vuelto habitual el consumo de estimulantes con el objetivo de reprimir el sueño y reavivar las energías. Muchas personas con una incesante vida laboral o de estudios, acuden a los estimulantes para poder soportar y responder de buena manera a sus actividades y a sus exigencias.
"No se puede decir que el consumo y el abuso de estimulantes genera una adicción directamente física, aunque si puede generar una dependencia psicológica. Los posibles riesgos de dependencia se inician, en el caso de una persona que los consuma para se, como una que los haga para cumplir con sus actividades cotidianas, es el hecho de poder cumplir dichos objetivos sin el consumo de la droga.
"Una sustancia psicotrópica o psicotropo (del griego psyche, 'mente'; y tropein, 'tornar') es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento.
"Tercera. Como bien es señalado en la exposición de motivos de los promoventes, más de mil productos pueden ser inhalados para obtener placer de corta duración. Los inhalables más populares entre los adolescentes entre los 12 y los 17 años son pegamento, cemento, crema de calzado, pintura, gasolina y líquido de encendedores. Otros inhalables comúnmente utilizados y

Ahora bien, por supuesto existe la posibilidad de que esas consideraciones del legislador podrían no ser correctas o suficientes para tomar la decisión legislativa de prohibir que las sustancias comprendidas en la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud sean vendidas o suministradas a menores o incapaces, mediante cualquier forma, tal como se planteó en la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, tal como lo expresé durante las discusiones del presente asunto, estimo que para realizar el escrutinio constitucional y llegar a la conclusión a la que arribó la mayoría en el Tribunal Pleno, se tendría que haber contado con los elementos científico-médicos y

---

fácilmente al alcance son esmalte líquido o corrector, pintura de spray, aerosol de crema para repostería y spray de cocina.
"Cuarta. El consumo de inhalables se volvió popular entre los adolescentes jóvenes en la década de 1970 con la 'inhalación de pegamentos'. Desde entonces, una mayor variedad de inhalables se han vuelto populares. El uso de inhalables involucra particularmente a adolescentes jóvenes o niños en edad escolar.
"Los inhalables más utilizados son, entre otros:
"• Aerosoles para desodorantes o aerosoles para el cabello
"• Líquidos para la limpieza
"• Gasolina
"• Líquido corrector de mecanografía
"• Pegamentos para maquetas
"• Pinturas en aerosol
"Los efectos negativos del abuso de inhalables abarcan:
"• Daño cerebral
"• Convulsiones
"• Daño renal o hepático
"• Daño nervioso (neuropatía periférica)
"• Muerte súbita
"Quinta. Diversos datos señalan que la edad promedio del primer uso de éstos son los 12 años; aproximadamente 2 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años reportan que han usado inhalables por lo menos una vez en la vida; entre 1994 y 2000, el número de nuevos consumidores aumento a más de 50 por ciento.
"…
"Novena. Con relación al artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, es importante aclara que la Ley General Salud, en el capítulo VI, 'Sustancias psicotrópicas', en las fracciones V y VI del artículo 245 el cual establece las sustancias psicotrópicas y su clasificación en grupos, referente al tema de inhalables que establecen:
"V. Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública;
"...
"VI. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, las que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes; esto, respecto al tema de inhalables.
"Por tanto, se propone la siguiente redacción:
"Artículo 467 Bis. Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta ley se aplicarán de 7 a 15 años de prisión.
"Décima. Los integrantes de la Comisión de Salud consideran que esta reforma es de gran importancia, ya que propone dar un gran paso en el tema de inhalables, debido a la necesidad que existe para que quien venda estas sustancias psicotrópicas, que son utilizadas como inhalables, a menores de edad, a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho,

técnicos que sustentaran que no existió razonabilidad y proporcionalidad jurídica en la decisión legislativa, porque dichas sustancias –para el caso ninguna de esas sustancias, dado el alcance invalidante de la decisión mayoritaria de toda la fracción IV– no pueden ser riesgosas para los menores o incapaces y pueden acceder a ellas libremente. Dado que no se contaba con esos elementos, se debió privilegiar el interés superior del menor y la protección de los incapaces por su situación de mayor vulnerabilidad, frente a los demás derechos que entraron en colisión en el presente caso.

Consecuentemente, por las razones expuestas, difiero de la posición mayoritaria en la que declaran la invalidez del artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, en la porción normativa que remite a la fracción IV del artículo 245 de la propia ley.

Nota: El presente voto también aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de marzo de 2015

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto concurrente que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz relativo a la acción de inconstitucionalidad 2/2014 .

I. Antecedentes

En sesión de primero de diciembre de dos mil catorce, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el artículo 467 Bis de la Ley General de Salud en la porción normativa que hace referencia a la fracción IV del artículo 245 del mismo ordenamiento. El artículo impugnado sanciona con una pena de prisión de 7 a 15 años "al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, sustancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245" de la misma ley. Sin embargo, el contenido en la fracción IV se trata de un listado de sustancias psicotrópicas, entre las que se encuentran sustancias que sirven para el tratamiento de diversos padecimientos y que según el diverso artículo 252 su venta está permitida al público en general siempre y cuando se tenga una receta médica que así lo prescriba. En este tenor, el accionante, el procurador general de la República, estimó que esta remisión viola los principios de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal pues según él, genera incertidumbre, poca claridad y precisión para determinar la conducta prohibida por el tipo penal.

II. Razones de la mayoría

La mayoría determinó que el precepto efectivamente viola el principio de seguridad jurídica, el de taxatividad de la ley penal y el de razonabilidad o proporcionalidad constitu-

---

se les imponga una pena de prisión. Recordemos que como legisladores se tiene el compromiso de velar por los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como los jóvenes y los niños.
"Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de Comisión de Salud de la LXI Legislatura someten a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:
"Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de adicciones a productos inhalables. …"

cional. El primero básicamente debido a que el mismo ordenamiento en su artículo 252 establece que esta misma lista de sustancias podrán ser vendidas y suministradas al público en general, siempre y cuando, cumplan el requisito de presentar la receta médica correspondiente. Esta contraposición entre lo prohibido por la norma impugnada y el artículo 252, genera incertidumbre jurídica pues impide que los ciudadanos conozcan con absoluta seguridad la conducta prohibida.

Asimismo, se viola el principio de taxatividad, debido a que la norma penaliza de manera general e indiscriminada la venta y suministro a menores de edad o incapaces de las sustancias contenidas en la fracción IV del artículo 245 de la Ley General de Salud y se contrapone con otras disposiciones del mismo ordenamiento (al artículo 252) lo que, "evidentemente contraviene al deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales".

Finalmente estima que, la norma vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica ya que aun cuando la norma persigue un fin constitucionalmente válido, el medio no es adecuado ni idóneo ni razonable. Del proceso legislativo que dio lugar a la reforma, se advirtió que, se pretendió combatir la adicción y el consumo de sustancias inhalables con efectos psicotrópicos sobre todo en menores e incapaces, sin embargo la norma al prohibir mediante cualquier forma la venta o el suministro de sustancias que según el propio artículo 245 tienen amplio uso terapéutico, constituye una carga excesiva o desmedida para el demandado, por lo que la norma se consideró sobreinclusiva.

III. Razones de disenso

Si bien agradezco el esfuerzo del Ministro ponente por incorporar el argumento de la violación al principio de razonabilidad jurídica (desarrollo con el cual estoy de acuerdo), me gustaría recalcar, como lo expresé durante la discusión, que en mi consideración la norma impugnada no viola el principio de taxatividad. Pues de la lectura del precepto se desprende claramente lo que el legislador quiere determinar, que la venta o suministro a personas menores de edad o incapaces de determinadas sustancias se sancione.

Así, como bien lo expresa la sentencia en su página 33: "… el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas". En este sentido, considero que la norma tiene una mala confección técnica, como es el caso muy destacado, de la cafeína; creo que lo que estaban tratando de regular los legisladores es el tema de las bebidas estimulantes que tienen altas dosis de cafeína, pero al haber puesto cafeína en su condición general, me parece que la descripción típica no es vaga ni imprecisa ni abierta o amplia sino que es sobreinclusiva en cuanto a las potenciales conductas que, en su aplicación, pudieran resultar perseguidas o castigadas. Esto, sin embargo, insisto, no es un problema de taxatividad, sino de razonabilidad o de falta de razonabilidad y de falta de proporcionalidad en la conducta regulada.

Debido a la anterior precisión me pareció necesario formular el presente voto concurrente.

Nota: El presente voto también aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de marzo de 2015

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEGUNDA PARTE

PRIMERA SALA
DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECCIÓN PRIMERA
JURISPRUDENCIA

Subsección 1.
POR REITERACIÓN

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3113/2014. 28 DE ENERO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JULIO CÉSAR RAMÍREZ CARREÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada por un Tribunal Colegiado especializado en materia penal, en un juicio de amparo directo, y no se estima necesaria la intervención del Pleno de este Máximo Tribunal.

SEGUNDO.—**Oportunidad.** El recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos se advierte que la sentencia de amparo le fue notificada personalmente al quejoso el **diecinueve**

de junio de dos mil catorce,[3] surtiendo efectos el día hábil siguiente **veinte**, por lo que el plazo de diez días que señala el artículo referido corrió del **veintitrés de junio al cuatro de julio de dos mil catorce**, descontándose los días **veintiocho y veintinueve de junio de dos mil catorce**, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en términos de lo establecido en el punto primero del Acuerdo General 18/2013 del Consejo de la Judicatura Federal.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue interpuesto el **diecinueve de junio de dos mil catorce**,[4] esto es, antes de iniciar el cómputo del plazo, es evidente que se interpuso oportunamente. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente la tesis 1a./J. 79/2005 de esta Primera Sala, del rubro siguiente: "RECLAMACIÓN. ES OPORTUNA SU INTERPOSICIÓN AUN ANTES DE QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA ELLO.",[5] toda vez que el recurso fue presentado el mismo día en que surtió efectos la notificación del auto impugnado.

TERCERO.—**Elementos necesarios para resolver.** Previo estudio de la procedencia del recurso y en atención a una adecuada metodología para resolver el asunto, se estima indispensable hacer referencia a los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, las consideraciones del Tribunal Colegiado para negar el amparo, así como los agravios expuestos por el recurrente.

Demanda de amparo. El quejoso planteó en esencia los conceptos de violación siguientes:

---

[3] Foja 4 del ADR. 3113/2014.

[4] Foja 4 del ADR. 3113/2014.

[5] Tesis 1a./J. 79/2005. Publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 264, con rubro y texto siguientes: "RECLAMACIÓN. ES OPORTUNA SU INTERPOSICIÓN AUN ANTES DE QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA ELLO.—La interpretación analógica y sistemática de los artículos 24, fracción III y 25 de la Ley de Amparo, en relación con el 21 del propio ordenamiento, permite establecer que las reglas para la presentación de la demanda de amparo que prevé el precepto último citado, son aplicables para el recurso de reclamación, por lo que tratándose de éste, el recurrente puede interponer dicho recurso al momento en que se le notifique el acuerdo recurrido, es decir el mismo día, o bien al siguiente en que surta efectos la notificación de aquél, sin que por ello deba considerarse presentado extemporáneamente, máxime si no existe disposición legal que prohíba expresamente presentarlo antes de que, comience a correr el plazo otorgado para dicho trámite, ni que señale que por ello sea extemporánea o inoportuna su interposición."

a) Se violaron en su perjuicio los derechos humanos de debido proceso, legalidad, acceso a una justicia imparcial, defensa adecuada, así como los principios de actuación de las instituciones policiales y de prohibición de tormento.

b) De igual forma se violentó en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, no se fundó ni motivó debidamente la sentencia condenatoria, por lo que también se violentó el principio de legalidad.

c) Además se actuó en contravención del contenido del artículo 1o. constitucional ya que no se consideró el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que en la determinación impugnada no se tuvo en cuenta el principio pro persona para analizar como violaciones al procedimiento aquellas cometidas en la averiguación previa, en virtud de que se vieron afectadas las garantías contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales.

d) La detención fue ilegal, en virtud de que sin una orden de aprehensión y en un contexto en el que el quejoso no se encontraba realizando ningún acto ilícito (se encontraba platicando en la parte trasera de un automóvil marca Clío), que ameritara que los agentes captores lo detuvieran y lo registraran.

e) No se le puso de forma inmediata a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, pues no se justifica la dilación de dos horas que se verificó entre el momento de su detención y su presentación ante el Ministerio Público, toda vez que, entre el lugar de su detención y las oficinas del Ministerio Público no hay más de cinco kilómetros de distancia. Lo anterior, a fin de cometer actos de intimidación para obtener la declaración inculpatoria del indiciado.

f) No se configuró prueba plena de los elementos normativos del delito de robo, en lo que se refiere a la conducta o acción de apoderamiento de la cantidad de ********** pesos en efectivo que constituye el objeto material del delito; por lo que no se configuró el ilícito de robo previsto en el artículo 289, fracción V, del Código Penal del Estado de México abrogado. Lo anterior, en virtud de que el ofendido para acreditar el hecho de que retiró del banco la cantidad que le fue robada, exhibió solamente copias simples de cinco cheques, tales documentales privadas no son idóneas para tomarlas como base de la acusación y la condena impuesta.

g) No se apreció de forma correcta el testimonio rendido por **********, quien dijo ser empleado de la institución de banca múltiple **********, cues-

tión que nunca se acreditó fehacientemente. Resulta violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales otorgar valor probatorio al testimonio señalado toda vez que, el mismo fue mendaz y con inconsistencias.

h) Por lo que toca al dicho de **********, en su carácter de parte acusadora; tampoco debió otorgársele valor probatorio, en virtud de que su declaración fue inducida por la policía al mando del Ministerio Público investigador del orden común, pues le fueron mostradas fotografías del ahora quejoso, refiriendo que era la persona que cometió el robo en su contra el día trece de agosto de dos mil nueve. Fue a partir de que le fueron mostradas dichas impresiones fotográficas que el ofendido pudo "reconocer" al ahora quejoso. La referida identificación, se realizó además, en contravención de la garantía de adecuada defensa, pues no existe constancia de haber sido asistido por abogado en la celebración de la misma. En virtud de todo lo anterior, la prueba referida es ilícita y, con ello, se conculcó el principio de presunción de inocencia en contra del quejoso.

i) En virtud de todas las irregularidades que se dieron desde la averiguación y en el proceso, es evidente que también se violó el derecho del quejoso a un debido proceso, de ahí que resulta cuestionable la verosimilitud de las imputaciones hechas en contra del quejoso y de las circunstancias en las que se dieron los hechos origen de la causa penal, por tanto, la duda razonable debe operar en favor del reo.

Resolución del Tribunal Colegiado. En la parte conducente, el Tribunal Colegiado expuso las consideraciones siguientes:

a) No son atendibles las manifestaciones en relación a que el Juez natural incurrió en el error de dar valor jurídico pleno a meras copias, causando un grave perjuicio al quejoso, ya que con base en dichas copias el Juez de primera instancia emitió una sentencia condenatoria en su contra; lo anterior, en virtud de que el juicio de amparo se admitió únicamente respecto de la sentencia definitiva de segunda instancia y la parte quejosa en su demanda formuló algunos conceptos de violación dirigidos a combatir el fallo del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, resultan inatendibles éstos por no cuestionar las consideraciones que invocó el tribunal de alzada.

b) De la revisión de las constancias que integran la causa penal 165/2009 y el toca de apelación 104/2012, no se advierte en perjuicio del quejoso, inobservancia a las formalidades esenciales del procedimiento referidas en el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; toda vez que en el caso fueron colmados los requisitos procedimentales, por lo que hace a la notificación de inicio del procedimiento

y consecuencias (en su declaración preparatoria estuvo asistido por el defensor de oficio que designó, se le enteró de los derechos que como inculpado le asisten); a la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; se respetó su potestad de impugnar la resolución de primera instancia. En ese tenor, es incuestionable que no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento y que, al respetarse los requisitos señalados, no se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que los conceptos de violación relativos son infundados.

c) Contrario a lo señalado por el impetrante de garantías, la sentencia reclamada cuenta con debida fundamentación y motivación, acorde con lo que establece el artículo 16 constitucional.

d) Es infundado que se haya violado en perjuicio del quejoso el artículo 17 constitucional, ya que en el caso no se observa que se efectuara justicia por propia mano o que se ejerciera violencia para reclamar algún derecho, además, es claro que las instancias judiciales que conocieron del caso, son tribunales expeditos para impartir justicia y que ésta se aplicó en el término que fija la propia Ley Fundamental, incluso se otorgó al justiciable el tiempo necesario que solicitó para su defensa, habiéndose emitido la sentencia que aquí se reclama, oportuna, completa e imparcialmente sin que exista indicio alguno de que al ahora quejoso se le haya obligado a pagar costa alguna por el servicio proporcionado en esos tribunales; y, por último, se enfatiza de que el hoy accionante del amparo no fue aprisionado por deudas de carácter civil; de modo que no se advierte violación al respecto.

e) Son infundados los conceptos de violación en relación a que no se acreditó el delito de que se trata. Lo anterior, en virtud de que la Sala Colegiada Penal responsable consideró correcta la decisión del juzgador de primera instancia de tener por justificado el delito de robo agravado por haberse cometido con violencia (delito previsto en los artículos 287, 289, fracción V y 290, fracción I, del Código Penal del Estado de México.

f) Son infundados los conceptos que indican que cuestionan el valor probatorio de las declaraciones del denunciante, pues la circunstancia de que el denunciante haya emitido su primera versión de los hechos días después de ocurrido el robo, no le resta espontaneidad e inmediatez a la denuncia realizada, el ofendido estaba en aptitud de presentar su denuncia, en tanto no prescribiera la correspondiente acción penal y, a su vez, el Ministerio Público estaba obligado a la investigación de los hechos delictivos que se hicieron de su conocimiento, por ser de los que se persiguen de oficio.

g) Es infundado el alegato relativo a que no debieron admitirse las copias simples de los cheques para demostrar que el ofendido tenía en su poder el numerario del que fue despojado, pues fue correcto que la autoridad responsable tomara en cuenta dichas copias simples para la emisión de la sentencia condenatoria, ya que se trata de indicios que se apoyan con el resto del acervo probatorio (concretamente con las declaraciones de los empleados bancarios), por lo que no era necesario su cotejo con los originales.

h) También resulta infundado que haya existido aleccionamiento o manipulación para que el ofendido declarara en la forma que lo hizo, porque fue quien resintió la conducta delictiva desplegada por los activos del delito de robo agravado y al revisar el ofendido las respectivas videograbaciones y fotografías proporcionadas por el apoderado legal de la institución crediticia, reconoció por sus características físicas y vestimenta a los sujetos activos del ilícito.

i) Es infundado que en la diligencia de reconocimiento el quejoso no estuviera asistido por su defensor público, pues en los autos de la causa penal de origen, no se advierte desahogo de alguna diligencia de confrontación, sino que **********, apoderado legal de **********, exhibió ante el Ministerio Público diversas impresiones fotográficas captadas por las cámaras de la sucursal bancaria en el momento en que ocurrió el ilícito; las cuales fueron puestas a la vista del pasivo y reconoció a los sujetos activos del delito. Por tanto, el reconocimiento se realizó dentro de la declaración que rindió **********. Debe añadirse que la responsable otorgó valor a las declaraciones del pasivo, en uso del arbitrio judicial que la ley le confiere, por haberse recabado las formalidades legales exigidas para tal efecto y porque al apoyarse con otros medios de convicción existentes en el sumario de la causa penal de origen, le generaron convicción para ser tomadas en cuenta para la acreditación del delito.

j) Es inoperante el concepto de violación que indica que no debió otorgarse valor a la declaración del testigo ********** porque se condujo con mendacidad al no acreditar fehacientemente ser empleado del banco y localizársele en el domicilio que proporcionó, lo anterior, porque dichas circunstancias resultan intrascendentes, ya que su carácter de empleado del banco donde se cometió el ilícito fue corroborado con el dicho de la cajera del banco, y si bien no fue posible localizarlo en el domicilio que indicó, obra en el expediente que el citado testigo compareció ante la autoridad judicial a ampliar su declaración ministerial y contestó las preguntas que le fueron formuladas en relación con los hechos.

k) Las pruebas existentes revelan que la conducta perpetrada resultó típica, en virtud de que se encuadró a la descripción legislativa del tipo penal.

l) A las testimoniales rendidas y el contenido del disco en el que se contiene la videograbación de la sucursal bancaria al momento en que se cometió el delito se adicionaron las declaraciones ministeriales del coacusado y del quejoso externadas el veintinueve de agosto de dos mil nueve, en las que confiesan haber participado en el delito origen del presente asunto. Versiones que fueron valoradas correctamente por la responsable conforme al principio de inmediatez procesal, pues indicó que son las más próximas a la realización del evento, sin tiempo suficiente para el aleccionamiento o reflexiones defensivas y las valoró como confesiones emitidas por personas mayores de edad, sin que se advierta coacción o violencia para que declararan en la forma en que lo hicieron, contando para ello con la asistencia del defensor de oficio que designaron, de hechos propios y sin que existan datos que a juicio de la autoridad las hagan inverosímiles.

m) Resultan infundados los conceptos de violación en los que se aduce que en la etapa de la averiguación previa, se violaron los derechos fundamentales del quejoso, pues al momento de ser detenido, el quejoso ofreció dinero a los agentes captores para que no lo detuvieran (pues el quejoso reveló que había participado en diversos robos a cuentahabientes), con lo que se actualizó la flagrancia por el delito de cohecho y fueron consignados por el diverso delito de delincuencia organizada, aunque posteriormente se haya absuelto al impetrante en relación al mismo.

n) Respecto del concepto de violación en el que se alega que no fue puesto de manera inmediata a disposición del Ministerio Público, se califica de infundado ya que fue detenido a las diecinueve horas y puesto a disposición a las veintiún horas, por lo que se considera que es un plazo razonable y, además, no existe constancia dentro del sumario que indique que fue torturado durante ese tiempo.

o) También es infundado el concepto de violación que señala que el Ministerio Público rompió con el principio de buena fe, toda vez que convalidó la detención ilegal del quejoso, pues como ya se señaló, se verificó la flagrancia por el delito de cohecho y delincuencia organizada.

p) Es infundado el concepto de violación en el que se alega que se transgredieron en su perjuicio los principios de presunción de inocencia, pues tal principio no subsistió, toda vez, que la acusación ministerial quedó plenamente acreditada y no la divergente versión defensista. Por lo que corresponde al principio *in dubio pro reo*, el concepto de violación resulta inoperante, porque tal cuestión es de competencia exclusiva de las autoridades judiciales de

instancia y no de la autoridad de amparo, que sólo califica la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que no puede por vía de amparo establecerse un estado de hesitación, ahí donde la responsable no encuentra tal indeterminación o duda.

q) Finalmente, por lo que hace al concepto de violación en el que el quejoso se duele de la omisión de considerar los tratados internacionales de derechos humanos en su beneficio, pues en virtud de la reforma constitucional de junio de dos mil once, es obligación de todas las autoridades tomarlos en cuenta y aplicar el principio pro persona, así como el de la progresividad de los derechos humanos; se califica de infundado, pues dado que el acto reclamado no transgrede ningún derecho humano del quejoso (toda vez que se cumplió con el principio de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia), bastaba con analizar el acto reclamado a la luz de la legislación local, sin necesidad de acudir a la aplicación de tratado internacional alguno.

Agravios del recurso de revisión. El recurrente expone como motivos de disenso el siguiente:

"No estoy de acuerdo con esta determinación, por lo que en términos del artículo 81, fracción II, en relación con el 40 de la Ley de Amparo, solicito presentar el recurso de revisión de amparo directo, remitiendo los autos respectivos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que resuelva sobre el ejercicio de la facultad de atracción para conocer del asunto propuesto, al considerar que el asunto reúne las características de interés y trascendencia de la aplicación al caso concreto de la jurisprudencia 1a./J. 21/2007, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 224; así como la jurisprudencia 1a./J. 45/2013 (sic), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, registro 2004134, página 529 y la jurisprudencia Décima Época. Registro 2002449. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia: Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, materia común, tesis I.9o.P.J/4CIO (sic), página 1775. Todas de la Primera Sala del Alto Tribunal del País. Para tal efecto y en aras de no quedar en estado de indefensión, atentamente solicito se me asigne defensor público que me patrocine durante la sustanciación del recurso de revisión para que sea promovido en tiempo y forma, teniendo en consideración la fecha de la notificación. Fecha 19 /junio/2014. Rúbrica."

CUARTO.—**Procedencia del recurso.** Antes de abordar el análisis de los argumentos hechos valer por la parte recurrente debe examinarse si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia para estar en aptitud de decidir si el recurso es o no procedente.

Con esa intención conviene destacar, en principio, que de la interpretación armónica de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución General de la República; 81, fracción II y 83 de la Ley de Amparo; y, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 5/1999 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene que la procedencia del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, se encuentra condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

A. Que en la sentencia recurrida se formule un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de normas generales o, la interpretación directa de un precepto constitucional; o, de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y,

B. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia.

En el presente caso, el recurso cumple los requisitos de procedencia antes mencionados, en tanto el Tribunal Colegiado en cuestión **interpretó directamente el artículo 1o. constitucional,[6] al establecer cuál es la relación entre los derechos fundamentales, de fuente internacional y constitucional**.

QUINTO.—**Estudio de fondo.** Esta Primera Sala, supliendo la deficiencia de los agravios, estima que procede revocar la sentencia recurrida.

El Tribunal Colegiado, al interpretar el artículo 1o. constitucional en cuanto al principio pro persona, estableció que no era necesario considerar el contenido de los tratados o instrumentos internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, si es suficiente la previsión que sobre los derechos humanos que se estiman violados, dispone la Constitución Federal,

---

[6] "**Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."

en cuyo caso basta el estudio que se realice de tales preceptos constitucionales, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011,[7] resolvió que la nueva conformación del catálogo de derechos humanos *no puede ser estudiada en términos de jerarquía*, pues la reforma constitucional modificó el artículo 1o. precisamente para integrar un catálogo de derechos y no para distinguir o jerarquizar esas normas en atención a la fuente de la que provienen. En consecuencia, el enfoque tradicional de la jerarquía de los tratados internacionales no constituye una herramienta satisfactoria para determinar el lugar que ocupan en el ordenamiento mexicano los derechos humanos reconocidos en dichos instrumentos normativos.

Asimismo, en dicho precedente se sostuvo que las *normas de derechos humanos* constituyen el parámetro de regularidad constitucional que deben atender todas las autoridades del Estado Mexicano, en el sentido de que los actos que emitan con motivo de su función deben ser coherentes con el contenido de esas normas.

Así, la trascendencia del cambio de paradigma constitucional antes descrito conlleva la necesidad de replantear parcialmente el principio de supremacía constitucional, con base en los nuevos enfoques introducidos por las reformas constitucionales de junio de dos mil once. En efecto, tradicionalmente se ha entendido que el principio de supremacía constitucional comporta el encumbramiento de la Constitución como Norma Fundamental del ordenamiento jurídico mexicano, lo que a su vez implica, entre otras cosas, que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes a la misma, tanto en un sentido formal como material.

Si bien, este entendimiento no ha cambiado, lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento, es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esta transformación se explica por la *ampliación* del catálogo de derechos humanos previsto dentro de nuestra Constitución, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, para el Tribunal Pleno *defender los derechos humanos es defender la propia Constitución*.

[7] Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2013, en lo que importa, por mayoría de diez votos.

De esta forma en la contradicción de tesis 293/2011 se sostuvo que el catálogo de derechos humanos comprende, tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en la Constitución, como aquellos contemplados en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. En este orden de ideas, la supremacía constitucional se predica de *todos los derechos humanos* incorporados al ordenamiento mexicano, en tanto forman parte de un mismo catálogo o conjunto normativo.

Ahora bien, esas consideraciones permitieron concluir al Tribunal Pleno que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales y en la Constitución *no se relacionan entre sí en términos jerárquicos*. En efecto, una vez que un tratado es incorporado al orden jurídico,[8] las normas de derechos humanos que éste contenga se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional, de tal suerte que dichas normas no pueden contravenir el principio de supremacía constitucional, precisamente porque forman parte del conjunto normativo respecto del cual se predica la supremacía.

En esta línea, también se sostuvo que en caso de que tanto normas constitucionales como normas internacionales se refieran a un mismo derecho, éstas se articularan de manera que se prefieran aquéllas, cuyo contenido proteja de manera más favorable a su titular atendiendo para ello al principio pro persona. Por otro lado, ante el escenario de que un derecho humano contenido en un tratado internacional del que México sea parte no esté previsto en una norma constitucional, la propia Constitución en su artículo 1o. contempla la posibilidad de que su contenido se incorpore al conjunto de derechos que gozarán todas las personas y que tendrán que respetar y garantizar todas las autoridades y, conforme a los cuales, deberán interpretarse los actos jurídicos, tanto de autoridades, como de particulares a efecto de que sean armónicos y coherentes con dichos contenidos fundamentales.

Asimismo, el Tribunal Pleno consideró que **las relaciones entre los derechos humanos que integran el nuevo parámetro de control de regularidad deben desarrollarse en forma armónica, sin introducir criterios de jerarquía entre las mismas.** Este criterio se refuerza con la interpretación literal, sistemática y original de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, las cuales fueron contundentes en cuanto a la necesidad de comprender a las normas que integran el catálogo de derechos hu-

[8] Para lo cual, según dicho precedente, se deben cumplir tanto requisitos formales como materiales de incorporación.

manos como un conjunto homogéneo que opera como un parámetro de regularidad del resto de las normas y actos jurídicos.

No obstante, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 1o. constitucional, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entendió que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Al respecto, es importante recordar que, como ha sido exhaustivamente expuesto, las fuentes normativas que dan lugar a los dos parámetros de control son las normas de derechos humanos previstas en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. **Consecuentemente, ambos parámetros de control forman parte del mismo conjunto normativo y, por tanto, integran el aludido parámetro de control de regularidad, de modo que hablar de constitucionalidad o convencionalidad implica hacer referencia al mismo parámetro de regularidad o validez**, aunque para efectos meramente didácticos pueda diferenciarse entre el origen de la norma empleada para desarrollar el estudio de validez respectivo.

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad al control de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad un *falso dilema*, pues una vez que el Estado ha ratificado el tratado internacional y reconocido la competencia de sus órganos de control, precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento jurídico. De tal manera, *el control de constitucionalidad implica necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria*"[9] (énfasis añadido).

Lo anterior se ve reflejado en la tesis de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL."[10]

---

[9] Corte IDH. *Caso Gelman vs. Uruguay*. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013, párrs. 69 a 72, 87 y 88.
[10] Tesis P./J. 20/2014 (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, de texto: "El primer párrafo del artículo 1o.

Por tanto, contrario a lo manifestado por el Tribunal Colegiado, de acuerdo al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución como en tratados internacionales, se debe acudir a ambas fuentes para determinar el contenido y los alcances del derecho, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia**.

En torno a los agravios del recurrente, resultan **inoperantes**, pues no realiza planteamientos concretos en contra de la sentencia y se limita a citar los datos de localización de dos jurisprudencias de esta Primera Sala y una tesis aislada de un Tribunal Colegiado, que se relacionan con violaciones al procedimiento acaecidas en la detención y la intromisión a un domicilio sin orden judicial; aspectos sobre los cuales no se advierte tópico de constitucionalidad, que amerite suplir la deficiencia de la queja al recurrente.

SEXTO.—**Efectos de la sentencia.** Al haber resultado fundado el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, se revoca la sentencia recurrida para el efecto de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito se ajuste a la interpretación realizada por esta Primera Sala del artículo 1o. constitucional, considerando que los derechos fundamentales de rango internacional y constitucional no se relacionan en términos de jerarquía y, por tanto, para resolver el asunto en cuestión deberá construir el contenido del derecho acudiendo a ambas fuentes y favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y una vez realizado lo anterior con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.

---

constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve:

PRIMERO.—En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala, se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—Devuélvanse los autos, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: (ponente) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.),* las normas de derechos huma-

*__Nota:__ La tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) invocada, fue publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL,

nos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

1a./J. 29/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 4533/2013. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Amparo directo en revisión 4/2014. 13 de agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Arturo Meza Chávez.

Amparo directo en revisión 1337/2014. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Amparo directo en revisión 2680/2014. 12 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Amparo directo en revisión 3113/2014. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 29/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de quince de abril de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL."

EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA PUEDE SER ACREDITADA POR EL AFECTADO CON LOS ELEMENTOS DE PRUEBA O INDICIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE, RAZONABLEMENTE, CONDUZCAN AL JUZGADOR A LA CONVICCIÓN DE QUE SU ORIGEN ES LEGAL.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, LA ACCIÓN RELATIVA ESTÁ SUJETA A QUE EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL EMITA ALGUNA DECISIÓN EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. RELEVANCIA DE LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA.

AMPARO DIRECTO 49/2012. 15 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA,

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ, MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ, ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS, HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA Y JULIO CÉSAR RAMÍREZ CARREÓN.

III. Competencia y oportunidad

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintiuno de ese mes y año, toda vez que se trata de un amparo directo cuya especialidad corresponde a esta Sala, la cual ejerció la facultad de atracción para conocer de este asunto.

20. La resolución reclamada de diez de febrero de dos mil once fue notificada a la parte quejosa por Boletín Judicial el viernes once de febrero de dos mil once, surtiendo sus efectos el lunes catorce de febrero siguiente, por tanto, el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, empezó a correr a partir del martes quince de febrero de dos mil once y feneció el lunes siete de marzo de dos mil once, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero, así como cinco y seis de marzo por ser sábado y domingo de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

21. Por tanto, si la demanda se presentó el viernes cuatro de marzo de dos mil once ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entonces se desprende que es oportuna.

IV. Existencia del acto reclamado

22. Es cierto el acto reclamado atribuido a la Sala responsable, por así manifestarlo en su informe justificado, lo cual se corrobora por desprenderse su existencia en los autos originales del juicio ordinario civil número 416/2010, que se acompañaron al mencionado informe.

V. Consideraciones y fundamentos

23. **Cuestiones necesarias para resolver el asunto.** A continuación, se sintetiza la resolución de la responsable y los conceptos de violación.

24. **Sentencia reclamada.** Las consideraciones sustentadas dentro del fallo fueron, en esencia, las siguientes:

La Sala responsable desestimó por infundados e inoperantes los agravios planteados, pues una vez que precisó los antecedentes de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, concluyó que ésta tiene entre sus finalidades el mermar las ganancias de la delincuencia organizada y extinguir el dominio de los bienes que fueron destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado cuando éste no logre probar a través de medios idóneos los siguientes tres elementos:

a) La procedencia lícita de dichos bienes;

b) Su actuación de buena fe; y,

c) Que estaba impedido para conocer su utilización ilícita.

Bajo ese tenor, estimó que para la procedencia de la extinción de dominio sin responsabilidad para el Distrito Federal, se requiere que se acrediten por la accionante, los siguientes elementos:

1) El hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, secuestro, **robo de vehículos** y trata de personas;

2) Que se trate de bienes establecidos en el artículo 5 de esa ley, es decir, aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió, aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito pero que hayan sido utilizados o destinados a **ocultar o mezclar** bienes producto del delito siempre y cuando se reúnan los extremos de la hipótesis anterior, aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo y aquellos que estén intitulados a nombre de terceros pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos

patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por estos delitos se comporte como dueño; y,

3) Que el afectado **no** logre **probar** la **procedencia lícita de dichos bienes** y su **actuación de buena fe**, así como que **estaba impedido para conocer su utilización ilícita**.

Ello sin perder de vista, que tratándose de un inmueble cuyo dominio se pretende extinguir por considerarse producto del delito, es claro que conforme al sistema de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal el interesado tiene la carga de acreditar la licitud de los recursos con los que se adquirió, pues dicha ley implícitamente supone lo contrario, en cambio, si se trata de un supuesto en el que un inmueble sólo fue utilizado para ocultar el producto de un delito, no existe fundamento racional para atribuir al interesado una carga de la prueba semejante al no haber relación lógica alguna entre la procedencia lícita o ilícita del bien y la ocultación del producto del delito, en tanto que esta última, por sí sola y por su naturaleza, nada indica, revela o demuestra acerca de la procedencia lícita o ilícita del lugar de ocultación, en la inteligencia de que lo anterior se explica independientemente de que en la especie sí aparece justificada la procedencia lícita del inmueble, como está manifestado en autos al haberse adquirido el inmueble materia de la litis en forma legal.

Por otra parte, a su juicio de la lectura integral de la demanda, advirtió que como autoriza el numeral 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la accionante basó su acción de extinción de dominio en el hecho de que el bien de la parte demandada fue ocupado para el ocultamiento de los bienes producto del delito, según lo apreció de las fojas 28, 29 y 30 de las actuaciones en estudio; de ahí concluyó que si el juzgador en el fallo no estableció una distinción de lo ejercido por la accionante, es evidente que ello se revela con el examen de la demanda, que se trató de una acción basada en la fracción II del artículo 5 de la ley en comento; por ende, estimó que el juzgador de origen al observar los argumentos que sirvieron para reclamar la pretensión de extinción de dominio, éstos fueron con claridad expuestos, por tanto, en la demanda se estableció con total conocimiento el supuesto en que se reclamó la extinción del dominio propuesta, en ese orden de ideas señaló que el interés, en este caso la pretensión tiene certeza en su señalamiento, pues como advirtió de la demanda en ésta se cumplió con la exposición de los hechos que fundan la acción, de conformidad con lo establecido por los numerales 1o. y 2o. del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo que apoyó en el criterio de la tesis aislada emitida por los Tribunales de la

Federación, cuyo rubro es: "DEMANDA EN EL JUICIO NATURAL. EL ESTUDIO INTEGRAL DEBE COMPRENDER LOS DOCUMENTOS ANEXOS."

Con base en lo expuesto, consideró que los argumentos relacionados consistentes en que el juzgador suplió la acción inicial, los estimó inexactos atento al estudio de las actuaciones y conforme al escrito inicial de demanda, de lo cual arribó a la conclusión de que la demanda intentada de forma clara establece que el bien sirvió para ocultar el vehículo automotor materia del hecho ilícito deducido en autos, lo que apoyo en el numeral 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Asimismo, consideró infundado lo que el apelante adujo en relación con que el Juez natural omitió tener en cuenta que no está acreditado el hecho ilícito, debido a que el robo del vehículo ocurrió en un lugar distinto al del domicilio del inmueble, por lo cual se establece que al hallarse al interior el automotor que sustrajeron con motivo de la denuncia de robo, se actualizó un encubrimiento por receptación; puesto que la ley en aplicación, no establece que la autoridad judicial del orden civil, deba analizar la existencia del tipo penal, sino la existencia de un hecho ilícito, que de conformidad a lo establecido en el numeral 1830 del Código Civil para el Distrito Federal, es aquel acto o hecho contrario a las buenas costumbres o a las leyes de orden público, bajo este contexto, estimó no se desvanece del acervo probatorio que el vehículo que fue reportado como robado fue encontrado al interior del inmueble objeto de la litis, sin que se justifique su estancia, pues si se aduce que el bien en arrendamiento era ocupado para prestar un servicio de lavado de autos y de pensión, no menos cierto es, que el vehículo de ningún modo fue encontrado por dichos servicios, sino que fue hallado con motivo de una sustracción sin consentimiento de su propietario, por lo cual como lo refirió la demandante en el inicial, el vehículo era ocultado, de esta forma consideró que se demostró la existencia de hecho ilícito conforme a la fracción VIII del artículo 2o. de la ley extintiva real en cita.

Asimismo, señaló que no pasa inadvertido lo expresado por la inconforme, en el sentido de que las diligencias practicadas por la autoridad ministerial accionante, y la denuncia de hechos presentada por ********** donde se establece que dentro del inmueble fueron ingresados diversos vehículos, y que respecto a este hecho no fue materia de prueba mediante la testimonial que estuviera desahogada en autos y, por lo cual, las actuaciones ministeriales no tienen la fuerza probatoria necesaria para deducir que el inmueble sea objeto de la acción en comento, sin embargo a su juicio éste era insuficiente, porque efectivamente las actuaciones ministeriales no tienen fuerza probatoria plena, no obstante, debían tenerse como indicio en relación con los hechos que

se plantean; además de que, refirió que el juzgador de origen, al abordar la existencia del hecho ilícito, estableció el enlace de lo expuesto en la citada averiguación frente al hecho de que al interior del inmueble se encontraba un vehículo que estaba denunciado como robado, por tanto, estimó que existe convicción que el inmueble era utilizado para el ocultamiento de vehículos, pues el automotor encontrado al interior no tenía contratada una pensión o se hallaba para su lavado, en consecuencia, la existencia del hecho ilícito, la tuvo debidamente demostrada sin que el juzgador haya procedido al análisis indebido del material probatorio respecto del acreditamiento del hecho ilícito, de conformidad a lo establecido en el numeral 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo que apoyó en la tesis de rubro: "DAÑO CONTRACTUAL Y DAÑO EXTRACONTRACTUAL. SU DIFERENCIA."

En otro orden de ideas, consideró infundado el agravio relativo a que el ahora inconforme que el inmueble lo tenía en arrendamiento, actuando de buena fe e impedida de conocer que el bien dado en uso era utilizado de forma ilícita, porque, si bien es cierto, de constancias advirtió que obran tanto el contrato de arrendamiento como los trámites y permisos administrativos relacionados al bien inmueble, esto es, que el arrendamiento otorgado estaba determinado en la buena fe de la arrendataria, ya que advirtió que el uso de suelo para el que estaba destinado, no ha variado o se haya mutado, pues lo que ocurrió es que el uso del inmueble sirvió para las conductas relativas al hecho ilícito, pues lo que se infiere del acervo demostrativo es que con motivo del uso al que estaba destinado el inmueble, ocurría o se volvía compatible para tener el ocultamiento de vehículos como aconteció con el automotor que se encontró al interior; sin embargo, a su juicio la buena fe de la parte demandada se volvió vulnerable con el tipo de hecho ilícito que ocurría al interior, que era ocultar el o los vehículos para desmantelarlos, previo robo, en consecuencia, las personas que poseían en arrendamiento, tenían acorde a la naturaleza del contrato el abuso del uso del derecho que otorga al gozar y usar el inmueble mediante arrendamiento.

Aunado a lo expuesto, señaló que no se tenía por acreditada que estaba impedida para conocer de su utilización ilícita, debido a que efectivamente, el uso del inmueble permite que se ingresen vehículos, pues ello no impide que al destinar el uso del inmueble se procediera a cerciorar en su interior, que el uso al que era destinado no contravenía con la actividad de lavado de automóviles o de resguardo de los mismos, sin que debiera pasar inadvertido que conforme a las actuaciones ministeriales se encuentra presente el dictamen en criminología, que mediante una inspección se encontraron al interior autopartes, por tanto, si bien es verdad que el contrato de arrendamiento otorga que no deba de oponerse al uso, ello no impide que la propietaria como titular

universal de los derechos de uso, goce y disfrute acuda a cerciorarse que en el inmueble se encuentre conforme al uso de suelo o a la tramitología urbana requerida para el uso comercial al que le arrienda, pues si bien los documentos aportan buena fe del uso al que se destina, pero no la certeza de que se encontraba impedida para conocer de lo que sucedía al interior, pues puede tenerse el acceso al inmueble de su propiedad y además del deber de cuidado de verificar las actividades o al menos la visita al inmueble, ya que la obtención de los permisos ante autoridades lo que acredita es que acudió a las mismas a presentar la documentación, mas no a determinar que el inmueble haya sido visitado en sus instalaciones para verificar el estado de conservación, pues también existe el deber del arrendatario de conservar la cosa en arrendamiento, por tanto, existe interés patrimonial en acudir al interior del inmueble y establecer que el uso está cumpliéndose, pues incluso si el uso no es, al que está destinado conforme a las permisiones urbanas implica que impongan multa o clausura al inmueble en total perjuicio de la arrendadora, luego entonces nada le impedía a la accionante o sus representantes, de que acudieran a verificar lo que era de su propiedad.

Igualmente, consideró que en cuanto al argumento de que la actividad era furtiva y a deshoras de lo que estaba permitido en la operación del establecimiento, ello tampoco era un argumento suficiente para desvanecer la falta de cuidado, teniendo en cuenta que del dictamen en criminalística se establece en la observación de los efectos encontrados al interior, que corresponden a las autopartes sin que se haya deducido en autos que realmente era un impedimento verificar o al menos cerciorarse que el inmueble era destinado para autolavado, pensión y venta de refacciones de vehículos, por tanto, no se le exige al demandado actos imposibles, sino deberes que se refieren a la operación contractual del inmueble en arrendamiento, conforme al uso, ya que no se trata de un bien habitacional sino con un fin comercial y que tenía acceso al público.

En ese sentido, y de conformidad a lo establecido en el numeral 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la autoridad responsable conformó la sentencia definitiva impugnada.

Por otra parte, la Sala consideró que de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, procede condenar al apelante a pagar las costas procesales causadas en ambas instancias, al ser conformes de toda conformidad la sentencia de origen con la presente resolución, lo que apoyó en los criterios jurisprudenciales de rubros: "CONDENA EN COSTAS. SENTENCIAS CONFORMES DE TODA CONFOR-

MIDAD." y "COSTAS. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR CONDENADO EN EL PAGO DE."

25. **Conceptos de violación.** La parte quejosa esencialmente argumenta, que:

I. Planteamientos de legalidad

En la sentencia reclamada se omitió dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones que fueron planteadas, relativas a por qué fue apegada a derecho la procedencia de la acción de extinción de dominio y cómo es que resultaron ineficaces todos y cada uno de los agravios.

Los artículos 5, fracciones I, II y 2, fracción VIII, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, se le aplicaron retroactivamente en su perjuicio, pues se está extinguiendo un derecho de propiedad que adquirió mediante compraventa, con anterioridad a la vigencia de la mencionada ley.

Cita como aplicables las tesis de rubros: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY.", "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. CÓMO DEBE ENTENDERSE LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.", "RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR." y "RETROACTIVIDAD."

Indebido análisis del tipo penal a la luz del artículo 1830 del Código Civil para el Distrito Federal y no conforme a la ley penal, como lo ordena el artículo 2o., fracción VIII, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, pues dicho artículo define lo que debe entenderse por hecho ilícito a la luz de la ley penal y no de la ley civil.

Es incorrecto que tenga legitimación para ejercer la acción de extinción de dominio el jefe de Gobierno del Distrito Federal, puesto que en términos de los artículos 29 y 32 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, así como el artículo tercero, fracción III, del acuerdo A/005/09 de treinta y uno de marzo de dos mil nueve, se otorga a la Agencia del Ministerio Público Especializada en el Procedimiento de Extinción de Dominio, a través de los agentes del Ministerio Público Especializados que le estén adscritos.

En el juicio de origen, el Ministerio Público representó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo cual contraviene la competencia que las leyes refieren, porque no se autoriza para que acuda como mandatario de quien carece de la referida legitimación.

No obsta que haya hecho valer hasta ahora la falta de legitimación del jefe de Gobierno del Distrito Federal, pues hasta antes de la sentencia reclamada eran incompatibles tales violaciones, porque no se habían consolidado en su perjuicio, y por ser tales violaciones de naturaleza constitucional, no corresponde a los Jueces del orden común resolver, sino a Jueces Federales, que tienen jurisdicción en cuestiones constitucionales.

Falta de congruencia, porque la Sala responsable restó importancia al agravio relativo a que debía acreditarse el delito de robo, pues de acuerdo con el artículo 22 constitucional, se debe acreditar un delito y no solamente un hecho ilícito.

De conformidad con el artículo 2, fracción VIII, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, la responsable no debió limitarse a las leyes civiles, sino abarcar las penales, en términos del artículo 3 de la ley de la materia.

Es de esencial importancia que se constate la existencia del hecho ilícito, pero entendiendo por éste la comprobación del delito de robo de vehículos, en los términos que fue instada la acción en el juicio natural, pues de lo contrario no se podrá tener como acreditado el primero de los presupuestos jurídicos de la acción, y en términos del artículo 50 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.

Se pretende tergiversar el alcance del artículo 2, fracción VIII, en el sentido de que se refiere a la teoría del acto jurídico propia del derecho privado, pero al tratarse de un procedimiento como origen la materia punitiva y siendo un juicio complejo por su composición prevista en la Constitución, el proceso de extinción de dominio no puede limitarse al concepto de hecho ilícito previsto en el Código Civil, sino al referido en la propia ley de la materia, que es la aplicable en su especialidad.

La Sala responsable omitió considerar que el inmueble no estaba en posesión de la quejosa, pues estaba arrendado.

Restó importancia al hecho de que el giro comercial para el cual era arrendado el inmueble, involucraba lo relativo a los vehículos, que por lo mismo la presencia de éstos no era un síntoma per se que pudiera advertir como algo indebido, lo que se constató con el testimonio de los vecinos, quienes vieron el uso normal en el inmueble, esto es, que servía para lavado de autos y pensión nocturna.

La responsable omitió considerar que el robo ocurrió a puerta cerrada y por la noche, que se trata de un solo evento y no de una pluralidad de eventos como exige el artículo 22 constitucional, además de que no se estaba ocultando sino desmantelando, lo cual era imposible que la quejosa se diera cuenta de lo ahí ocurrido; por lo que ese hecho no determina que ahí se ocultaban vehículos robados, conducta plural que exige la norma.

Los indicios apuntan a advertir que en el inmueble no se ocultaban vehículos robados sino que se introducían furtivamente, desarmaban e inmediatamente se empujaban a la calle, por lo que se trata de un delito diverso al previsto en el artículo 22 constitucional, sancionándosele a la quejosa por una cuestión ajena y de la que precisamente no hay indicio que haga suponer que no estaba impedida para ignorar ese evento.

La sentencia reclamada da sentado un evento que no se demostró plenamente durante el proceso; la norma exigió de la accionante el acreditar que el lugar servía para ocultar vehículos robados (plural), lo cual debió hacerse con elementos proporcionados durante el proceso civil y con independencia de que existieron actuaciones de la averiguación previa de la que derivó la acción, las cuales si bien sirven de indicio, la acción por ser autónoma requería ser acreditada plenamente al ejercitarse.

El artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, prevé que el hecho en que se basa la presunción debe ser probado, lo que no ocurre en la especie, pues en la secuela procesal se deduce la insuficiencia probatoria de la parte actora, aunado a que en la sentencia se pretendió justificar mediante aseveraciones subjetivas que es un indicio perfectamente válido, pero eso denota la ausencia de independencia para emitir el fallo.

Los artículos 29, 31 y 32 de la Ley de Extinción de Dominio, imponen que el agente del Ministerio Público debe recabar, recibir y practicar diligencias necesarias para acreditar el evento típico previsto en el artículo 4 del mismo ordenamiento, asimismo, que debe recabar pruebas para demostrar que el bien objeto del proceso se encuentra dentro de la hipótesis legal del artículo 5, lo cual indica que las pruebas son distintas a la misma averiguación previa o sentencia, según se advierte del artículo 29, lo cual se confirma con los diversos artículos 31 y 32, en especial cuando se exige en la preparación de la acción que el Ministerio Público le presente al Juez, entre otras, las pruebas que ofrezca para acreditar los dos anteriores extremos.

En la sentencia reclamada no se analizó lo relativo a la carga probatoria de la actora, pues se le permitió acreditar los extremos con el indicio que se desprende de las actuaciones penales.

El artículo 3 de la Ley de Extinción de Dominio indica como ley supletoria, tratándose de lo relativo a los delitos, el Código Penal para el Distrito Federal y en relación con la fracción I del mismo artículo, dispone que en la preparación de la acción de extinción de dominio se estará a lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

En la sentencia reclamada nada se dijo de la importancia de la naturaleza jurídica de la acción de extinción, de la que se deduce un acto privativo de autoridad, lo cual se asimila a la expropiación sin causa de utilidad pública, sin compensación y con procedimiento distinto, pues en la acción intentada es extinguir el dominio sin contraprestación alguna, en perjuicio de quien se coloca en la hipótesis legal que propende en debilitar la fuerza económica de quienes se dedican a desplegar determinado tipo de hechos delictuosos.

El procedimiento de extinción constituye la garantía de audiencia del afectado, como parte del derecho de contradicción del afectado, quien tiene la garantía y no la carga procesal, de refutar al actor que el bien tiene una procedencia lícita, que ha actuado de buena fe y, en su caso, el impedimento para conocer el uso ilícito de su bien inmueble; lo cual no exenta a la actora de acreditar los elementos de la acción, así como para acreditar que la afectada conocía previamente que en su inmueble se ocultaban bienes producto de uno de los delitos previstos en la norma jurídica, o que existen indicios para presumir que la afectada debía conocer dicho aspecto.

Ante la ausencia del primer elemento, no se debió tener por demostrada la acción en términos del artículo 50 de la Ley de Extinción de Dominio, por lo que la sentencia es inconstitucional, pues el evento por el cual se ejercitó la acción en contra de la quejosa, no se advierte la existencia del ocultamiento de los delitos de robo de vehículos en el inmueble objeto del procedimiento.

Indica la quejosa que el delito expuesto fue el encubrimiento por receptación, hecho ilícito que no está previsto en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio, por lo que es insuficiente para constatar los extremos que pretendía la actora, con lo que se demuestra la insuficiencia probatoria y el indebido ánimo insistente en primer y segunda instancias por exentar de la carga probatoria a la parte actora.

Insiste que el robo fue de un solo vehículo, no de vehículos como lo exige el artículo 4 de la misma ley, pero con el dicho de **********, se desvincula al inmueble del objeto del proceso de extinción de dominio, en tanto que corrobora que dicho bien no pudo haber servido como instrumento del

robo de que fue objeto, como tampoco sirvió para ocultarlo, pues se estaba desmantelando, por lo que debe estarse a la exacta aplicación de la ley penal.

Debe agregarse que se trata de un solo medio de prueba, la documental pública debe valorarse como indicio por tratarse de actuaciones penales, además de que la ley indica que la acción de extinción de dominio es autónoma e independiente de ese tipo de actuaciones; por lo que es indebido que fueran consideradas como pruebas independientes, porque sólo ayudó a la actora en tanto que se le releva del peso probatorio y justifica la referida insuficiencia probatoria.

La actora estuvo obligada a comprobar la actualización de los extremos del artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, en el sentido de que debió constatar fehacientemente que la afectada actuó de manera dolosa (con conocimiento pleno) o negligentemente (de las condiciones debió conocer el uso indebido que se le dio a su bien, por lo que su descuido debe sufrir las consecuencias) y que dicha situación contribuyó en la comisión del delito de robo de vehículos; lo cual no ocurrió en la secuela procesal que omitió valorar de manera adecuada la responsable.

La responsable dejó de considerar una cuestión de primer orden, pues la interpretación de la fracción III tanto del artículo 22 constitucional como del artículo 50 de la Ley de Extinción de Dominio, debe encaminarse a que el procedimiento resuelto por el Juez constituye la garantía de audiencia del afectado, como parte del derecho de contradicción, quien tiene la garantía y no la carga procesal, de refutar al actor que el bien tiene una procedencia lícita, que ha actuado de buena fe y, en su caso, el impedimento para conocer el uso ilícito de su inmueble.

No se demostró fehacientemente que en el inmueble se ocultaran vehículos, pues es un indicio de que en el inmueble se desmantelaban vehículos robados con el desconocimiento tanto de la arrendadora como de la arrendataria, pero tal cuestión no fue confirmada con elemento de prueba alguno, pues no hay forma de inducir que se ocultaban los vehículos robados, pues conforme a la indagatoria, los mismos se introducían furtivamente y con tal carácter se desmantelaban y sacaban del lugar de inmediato.

Es errada la apreciación de la responsable, en virtud de que indicó que se corroboró el ocultamiento por encontrarse en el interior un automotor, pero dicho vehículo estaba siendo desmantelado y no ocultado, por lo que sólo se pudo corroborar la presencia de un vehículo robado y no la pluralidad de con-

ductas exigidas en las directrices del procedimiento que el artículo 22 constitucional refiere.

No importó el arrendamiento, ni las medidas lógicas y apegadas a derecho que la propietaria previó para cerciorarse de manera objetiva que la arrendataria se preocuparía de respetar y cuidar el uso para el cual fue dado en arrendamiento el inmueble, siendo que en la confesional se constató que pasaba por el lugar, y al igual que los testigos, pudo corroborar que se le daba el destino correcto al lugar y nunca tuvo a la vista incongruencia alguna con el giro.

A pesar de tratarse de un hecho negativo y subjetivo con todas las dificultades que ello implica, demostró que no había forma posible de constatar que en el inmueble se desplegara hecho ilícito alguno o que sirviera para su ocultamiento o cualquier hipótesis que se pretenda, pues el cuidado de la propiedad cumplió con todo lo humanamente posible y legalmente exigible.

Con los testimonios de los vecinos del lugar, se evidencia que el inmueble si era ocupado para el uso que fue arrendado, y que si empleados ajenos al arrendador, a espaldas del arrendatario aprovecharon la furtividad para actuar ilícitamente, no hay elemento de convicción objetivo y fehaciente durante el proceso que permita inferir que la quejosa estaba en condiciones de conocerlo.

La Sala responsable no refiere la fecha y nombre de quien elaboró el dictamen criminal a que hace referencia, por lo que se ignora cuál es el elemento fehaciente que robustece el dictamen, pues los peritos no cuentan con fe pública y porque en la indagatoria no se advierte dictamen alguno que pueda concluir objetivamente que en el lugar se desmantelaban autos que no robó como lo exige la norma, tampoco existe reporte que constate que en el lugar existiera algún vehículo robado diverso al que se desmantelaba de manera oculta y por la noche, al momento de ser detenidos los empleados de la arrendataria.

Ningún dictamen pericial es prueba directa sino un instrumento auxiliar y menos cuando fue realizado con las reglas del procedimiento civil, lo cual la coloca en estado de indefensión.

En el caso de que existiera un dictamen en el sentido de que se encontraron autopartes, ello no significa que correspondieran al vehículo robado, por lo que no es correcto que la responsable favorezca al Gobierno del Distrito

Federal, buscando los elementos constitutivos de la acción, cuando la actora no se percató en acreditarlo.

La responsable dejó de valorar los medios de prueba desahogados durante el proceso, en virtud de que la quejosa sí cumplió con la obligación de vigilancia, limitada por el derecho de la arrendataria, ya que con la confesional quedó acreditado que sí pudo constatar que en apariencia se cumplía con los fines para los cuales fue dado en arrendamiento el inmueble, pues pasaba por el lugar y se percataba que los carros entraban y salían, aludiendo al servicio de lavado, confirmando que efectivamente se realizaba una actividad comercial lícita y agregó que se daba cuenta cuando iba al mercado y pasaba por ahí; lo cual fue corroborado con los testigos, quienes no hicieron referencia a alguna actividad ilegal o sospechosa y sí por el contrario, señalaron la incongruencia del negocio, en el sentido de que se lavaban y guardaban por la noche vehículos.

Que durante la absolución de posiciones, se desprende que ignoraba que en el inmueble se realizaban conductas contrarias al derecho, sin que se le pueda exigir otra conducta, quien al tener en arrendamiento el inmueble no podía hacer uso de él, ni desplegar una labor de policía en contravención de los derechos contratados por la arrendataria, sobre todo que las apariencias del lugar indicaban que el inmueble se utilizaba para el fin que fue arrendado.

Se dejó toda la carga probatoria a la quejosa, pues a la parte actora no se le exigió que presentara elementos que hicieran presumir el descuido aludido, con todo lo complicado que es, pues se le impone la carga de acreditar un hecho negativo y subjetivo por naturaleza.

La actora sólo ofreció como prueba la averiguación previa e incluso con el testimonio de los policías se corroboró que en el inmueble de manera oculta se desmantelaba un vehículo y que éste fue robado en distinta delegación, cuando estaba estacionado.

No existe elemento que suponga que la quejosa conocía de la comisión de la conducta ilícita, por el contrario la afectada siempre se condujo en términos de ley, esto es, sí verificó que el inmueble se utilizara como auto lavado y como pensión en la noche, a través de los permisos correspondientes y de los mismos contratos privados, de los que destaca que la arrendataria no fue vinculada con la perpetración del desmantelamiento del vehículo, siendo que era la persona que tenía la posesión derivada del inmueble y como tal, su acceso y cuidado.

Con las testimoniales a cargo de **********, **********, ********** y **********, demuestran que al ser vecinos sólo les fue humanamente posible advertir las actividades que se realizaban en el inmueble y las personas que las ejercían, lo que constata que a la quejosa le era humanamente imposible percibir o conocer una situación diversa a la apreciada por los testigos.

No puede presumirse que la quejosa se enteró del hecho ilícito desplegado al interior del inmueble, por lo que es injustificado que se hayan desestimado sus pruebas, pues tanto la testimonial como las documentales, reflejan el cuidado del derecho real, lo cual se apega a las normas jurídicas vigentes y, por lo mismo, no se le puede exigir otra forma de conducirse.

Se dejó de considerar que la acción debe proceder en perjuicio de la delincuencia organizada y no en detrimento de quien en consideración de la responsable denotó torpeza en el cuidado del inmueble arrendado, al no realizar conductas que van más allá de las exigencias legales.

A pesar de que el inmueble estaba arrendado, se consideró que no tuvo el cuidado y estaba obligada a introducirse en contra del derecho del arrendatario, pues no era casa habitación, lo cual va en contra de las normas aplicables al arrendamiento, pero la quejosa sí visitó el lugar físicamente.

El procedimiento de extinción es más que una formalidad, pues entraña la garantía de audiencia para el afectado, conlleva la certidumbre jurídica inherente del Estado de derecho moderno, porque por un lado, excluye la unilateralidad del acto administrativo al hacerlo jurisdiccional y autónomo de lo resuelto en el juicio de origen penal, liberando al gobernado del resultado penal con la posibilidad de contender en juicio civil y sin privilegiar al titular de la acción, en tanto que al actor se le releva de las cargas procesales propias para las partes en el juicio.

La condena en costas carece de fundamentación y motivación, pues al ser inconstitucional el fondo, lo accesorio sigue igual suerte.

II. Planteamientos de inconstitucionalidad

La Ley de Extinción de Dominio expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, concretamente en sus artículos 5, fracciones I (tácitamente aplicada) y II y 2, fracción VIII, en la sentencia reclamada violan las garantías de seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución, por violación a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, de la

Constitución Federal, ya que ningún precepto orgánico de la misma Constitución faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar respecto de delitos de delincuencia organizada, en lo cual confluyen todos los delitos por los que se genera la extinción de dominio, lo cual es evidente si se considera que la propia ley tildada de inconstitucional, a la luz del Código Penal para el Distrito Federal y de la exposición de motivos que generó la figura de extinción de dominio, así como de la propia ley, se motivó y sustentó en combatir la delincuencia organizada, de lo que se infiere que la citada ley, es inconstitucional, por estar regulando cuestiones relativas a delincuencia organizada por las que sólo el Congreso de la Unión está facultado.

La Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, no contiene las firmas de los integrantes o representantes del órgano legislativo, del jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni del secretario de Gobierno del Distrito Federal, por lo que resulta inconstitucional, pues la firma es el signo gráfico por el que se expresa la voluntad o la participación en determinado hecho o acto, en la especie la ley.

La Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal es inconstitucional, porque viola el derecho de seguridad jurídica, consistente en "la presunción de inocencia", pues pretende extinguir el dominio de un bien de un tercero antes de que se consolide la existencia del delito que se atribuye en la figura punitiva.

Por lo que, la reforma constitucional en materia penal de diecisiete de junio de dos mil ocho, deviene violatoria de la garantía de seguridad jurídica, por transgredir el principio de presunción de inocencia que se encuentra tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Estudio

26. **Problemática jurídica a resolver.** Esta Primera Sala deberá dar respuesta, en primer orden, a aquellos conceptos de violación en los que se afirma que la Asamblea Legislativa para el Distrito Federal carece de facultades para emitir la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, ya que ningún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la faculta para legislar respecto de delitos de delincuencia organizada, así como si dicho ordenamiento es inconstitucional por no contener las firmas de los integrantes del órgano legislativo, del jefe de Gobierno ni del secretario de Gobierno, ambos del Distrito Federal.

I. Competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para emitir la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal

27. En los conceptos de violación en esencia la quejosa alega que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tiene competencia para legislar en materia de extinción de dominio, respecto de lo cual la peticionaria de garantías expresa los argumentos siguientes:

La Ley de Extinción de Dominio expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, concretamente en sus artículos 5, fracciones I (tácitamente aplicada) y II, y 2, fracción VIII, en la sentencia reclamada violan las garantías de seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución, por violación a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, ya que ningún precepto orgánico de la misma Constitución faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar respecto de delitos de delincuencia organizada, en lo cual confluyen todos los delitos por los que se genera la extinción de dominio, lo cual es evidente si se considera que la propia ley tildada de inconstitucional, a la luz del Código Penal para el Distrito Federal y de la exposición de motivos que generó la figura de extinción de dominio, así como de la propia ley, se motivó y sustentó en combatir la delincuencia organizada, de lo que se infiere que la citada ley, es inconstitucional, por estar regulando cuestiones relativas a delincuencia organizada por las que sólo el Congreso de la Unión está facultado.

28. Los motivos de agravio sintetizados son infundados atento a los consideraciones siguientes:

29. Para explicar lo anterior, en primer lugar, cabe hacer un paréntesis para analizar el sistema de competencias que la Constitución Federal otorgó al Congreso de la Unión, al Distrito Federal y al resto de las entidades federativas.

30. Conforme lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[1] nuestro país se encuentra constituido como una *República representativa, democrática y federal*, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, empero, unidos en

[1] "**Artículo 40.** Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental."

una Federación, los cuales se asocian delegando algunas facultades a la Federación, acorde con los postulados previstos en la propia Ley Fundamental.[2]

31. En lo que atañe al Distrito Federal, debe decirse que conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de nuestra Carta Magna,[3] el mismo es una entidad federativa, parte integrante del Estado Federal Mexicano, pero además, es la sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.[4]

32. Ahora bien, en lo que refiere al régimen de competencias entre los Estados y la Federación, la *regla general* es que en nuestro sistema, por disposición expresa del artículo 124 de la Constitución Federal, rige la *competencia residual*, en virtud de la cual, las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Ley Fundamental a la Federación, se entienden reservadas a los Estados.

33. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, la regla es a la inversa, según consta en el artículo 122 constitucional, que en lo que interesa se reproduce a continuación:

"**Artículo 122.** Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

"Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

---

[2] El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, que en su artículo 4o. señalaba que: "*La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República representativa popular federal*", y en el artículo siguiente mencionaba a las partes integrantes de la Federación. El modelo de "Estado federal" fue tomado de la Constitución Norteamericana, en el caso de México. Sin embargo, al revés de como sucedió en el país de origen de la institución, el federalismo no sirvió para conjuntar realidades anteriores y en cierta forma dispersas, sino para crear unidades descentralizadas dentro de un país con tradiciones fuertemente centralistas heredadas del periodo colonial.

[3] "**Artículo 43.** Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y **el Distrito Federal**."

[4] "**Artículo 44.** La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General."

"La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno.

"…

"La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

"A. Corresponde al Congreso de la Unión:

"I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa."

34. Luego, de la simple lectura del precepto constitucional anterior, claramente se advierte que el Distrito Federal tiene su propio cuerpo legislativo a nivel local denominado "*Asamblea Legislativa del Distrito Federal*", y que éste sólo está facultado para legislar en aquellas materias que le han sido delegadas **expresamente**.

35. En efecto, de la norma transcrita se advierte que corresponde al Congreso de la Unión legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en aquellas materias conferidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por delegación expresa.

36. El artículo 122 constitucional, apartado "C", base primera, fracción V, enumera las facultades que han sido delegadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como sigue:

"**C.** El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

"**Base primera.** Respecto a la Asamblea Legislativa:

"…

"**V.** La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

"a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;

"b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

"...

"Dentro de la Ley de Ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

"...

"La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa.

"Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución;

"c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.

"La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la asamblea.

"...

"d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito Federal;

"e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna,

funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad;

"f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, diputados locales y Ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales;

"g) Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos;

"h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

"i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

"j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

"k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;

"l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

"m) Expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos;

"n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal;

"ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y

"o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia asamblea, y

"p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución."

37. Las facultades señaladas son esencialmente coincidentes con las establecidas en el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

38. Hechas las anteriores precisiones sobre la distribución legislativa en el sistema mexicano, ha lugar ahora a dar respuesta a los conceptos de violación expresados, precisamente, sobre la base de dichas consideraciones, pues contrariamente a lo alegado por la quejosa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí es competente para legislar sobre la materia de extinción de dominio, como se explicará enseguida:

39. En primer orden, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 18/2010,[5] emitió algunas consideraciones sobre la competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cuyo análisis acudió a lo resuelto por el propio Pleno en la controversia constitucional 31/2006,[6] en donde se estableció un test para determinar si al Distrito Federal le corresponde el ejercicio de determinada competencia, al tenor de lo que enseguida se reproduce:

"… el Distrito Federal al ser la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos es una entidad singular ya que las funciones legislativas, ejecutiva y judicial en esa localidad corresponden a los Poderes Federales, con la concurrencia de las autoridades locales.

---

[5] Resuelto en sesión de dieciocho de febrero de dos mil catorce. En ese asunto se determinó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para legislar en materia de extinción de dominio, por mayoría de siete votos de los Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas y Pérez Dayán. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo y presidente Silva Meza votaron en contra. El señor Ministro Valls Hernández estuvo ausente.

[6] Resuelto el siete de noviembre de dos mil seis, por mayoría de nueve votos, donde fue ponente el Ministro José Ramón Cossío Díaz.

"Así, consideramos que el artículo 122 de la Constitución Federal, al disponer expresamente en su sexto párrafo: '... La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: ...', establece un principio de división funcional de competencias entre los Poderes de la Unión y los órganos de Gobierno del Distrito Federal, a la vez que remite al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

"Así, en el Distrito Federal este principio de división funcional de competencias se desarrolla tanto constitucional como estatutariamente mediante la atribución de competencias expresas conferidas tanto a los Poderes de la Unión como a todos y cada uno de los órganos de Gobierno del Distrito Federal.

"En este sentido, dicho principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que al respecto establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

"Ahora bien, este principio de división funcional de competencias establecido en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a su vez remite al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, puede verse transgredido si se afecta el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas a su favor cualquiera de los órganos o poderes a los que les competan.

"Sin embargo, para llegar a determinar ello, se debe establecer un estándar que dará pauta para determinar a quién corresponde el ejercicio de la competencia, y si este ejercicio transgrede o no el principio de división funcional de competencias. Para ello, debemos realizar los siguientes pasos:

"1. Encuadramiento. Realizar un análisis y estudio para determinar en qué materia competencial se encuentra el acto desplegado por el órgano o poder, es decir, debemos encuadrar la competencia ejercida y cuestionada, para lo cual se tiene que analizar la materia propia, es decir, si se trata por ejemplo de cuestiones de seguridad pública, presupuestarias, electorales, educación, etcétera.

"2. Ubicación. Dado que en el Distrito Federal existe, como ya dijimos, una concurrencia entre los Poderes Federales y las autoridades locales en las

funciones legislativas, ejecutiva y judicial de esta entidad, debemos analizar si esa materia ya identificada es facultad de los Poderes Federales o de las autoridades locales, ello de conformidad con las disposiciones establecidas tanto en el artículo 122 constitucional como en los preceptos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

"En este sentido, debemos constatar que la actuación del órgano o poder emisor del acto descanse en una norma, ya sea constitucional o estatutaria, que otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y estatutaria de la esfera competencial de las autoridades.

"Finalmente, determinar si la competencia ejercida efectivamente le correspondía al Poder Federal que haya actuado o al órgano o autoridad del Distrito Federal que la haya desplegado.

"3. Regularidad. Una vez que se determine lo anterior, se deberá analizar si el órgano o poder que ejerció la competencia que le correspondía, lo hizo sin violentar la esfera de competencias que otros órganos o poderes del mismo ámbito tienen previsto para el ejercicio de sus funciones …"

40. Con la aplicación de ese test, en la acción de inconstitucionalidad 18/2010, el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo lo siguiente:

"En términos del artículo 122 constitucional, apartado 'C', base primera, fracción V, inciso h), la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puede legislar en las materias civil y penal; sin embargo, del análisis de la figura de extinción de dominio se advierte que no pertenece de manera específica a sólo una de esas materias.

"El artículo 22 constitucional que la crea establece, puntualmente, que su procedimiento debe ser jurisdiccional y autónomo del de materia penal. Pero eso no la convierte en una acción de naturaleza civil, dado que no puede desvincularse de su origen, pues está íntimamente relacionada con la comisión de hechos ilícitos tipificados como secuestro, robo de vehículos, trata de personas, delitos contra la salud y delincuencia organizada.

"Por otra parte, su finalidad consiste en declarar la extinción de un bien por estar vinculado con el hecho ilícito de que se trata, lo que tampoco es propio del derecho civil, pues éste tiene como base regular relaciones y dirimir conflictos de derecho privado, y en la especie dicha acción la ejerce el Estado como herramienta con fines sancionatorios, lo cual también permite advertir cierta coincidencia con la materia administrativa.

"De esta manera, con independencia de que se considere a la figura de extinción de dominio como propia de la materia civil o penal o una combinación de éstas, lo cierto es que en todas estas materias la Asamblea Legislativa tiene competencia legislativa."

41. Cabe destacar que la generalidad del análisis así efectuado atiende a que, en aquel preciso asunto no se expresaron motivos de disidencia en torno a las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para emitir la Ley de Extinción de Dominio; sin embargo, sí fue materia de discusión y, por ende, de decisión a cargo del Tribunal Pleno.

42. Ahora bien, en el presente asunto la posición de la quejosa es en el sentido de que ningún precepto de la Constitución se faculta a la Asamblea Legislativa para legislar respecto de delitos de delincuencia organizada, ya que ello es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión por así disponerlo en el artículo 73, fracción XX, de nuestra Carta Magna.

43. Las inconformidades expresadas en ese sentido son infundadas.

44. Para arribar a esa conclusión, se toma en cuenta la metodología adoptada al resolverse la acción de inconstitucionalidad 18/2010 y se procede a realizar el primer paso del test propuesto en la controversia constitucional 31/2006, esto es, el **encuadramiento**, que consiste en realizar un análisis y estudio para determinar en qué materia competencial se encuentra el acto desplegado por el órgano o poder, para lo cual debe analizarse la materia propia sobre la cual, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevó a cabo sus facultades legislativas.

45. Ahora bien, dadas las particularidades de este asunto, ese primer paso debe llevarse a cabo de manera simultánea con el segundo que corresponde a la **ubicación**, pues ambos guardan una íntima relación ante el planteamiento formulado por la quejosa, cuenta habida que ese último consiste en analizar si esa materia ya identificada es facultad de los Poderes Federales o de las autoridades locales, ello de conformidad con las disposiciones establecidas tanto en el artículo 122 constitucional como en los preceptos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

46. En ese sentido, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 40/95, con el rubro: "FACULTADES EXPRESAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE ESTABLEZCAN LITERALMENTE

EN LA CONSTITUCIÓN.",[7] en un asunto en el que analizó la facultad de que dispone la asamblea para aprobar la Ley de Ingresos, interpretó que si bien es cierto que el régimen de competencias del Distrito Federal debe estar establecido en la Constitución, a diferencia del régimen de competencia local que es residual, lo cierto es que esa facultad no tiene que estar formulada de manera literal. Las consideraciones que sustentaron ese preciso punto de vista son:

• Para la interpretación de las normas constitucionales, en razón no sólo de su supremacía en el sistema jurídico, sino de sus contenidos, que tratan de dar respuesta a la realidad social, económica o política existente, el intérprete para desentrañar su significado, debe no sólo hacer uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado (gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino incluso buscar la finalidad que la norma persigue, en la perenne movilidad de la sociedad y la necesaria adecuación de sus instituciones. Por ello, se estimó conveniente acudir a la interpretación teleológica que permita irrumpir en su esencia.

• El régimen de facultades expresas que prevalece en el orden jurídico mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en un solo precepto o con determinadas palabras se establezcan las atribuciones de la autoridad, pues ello haría prevalecer un sistema de interpretación literal que no es idóneo por sí para la aplicación del derecho; y que desarticularía el sistema establecido por el poder revisor de la Constitución, al asignar facultades a la asamblea de representantes con la coexistencia de las atribuciones del Congreso de la Unión y del referido órgano, para legislar en lo relativo al Distrito Federal.

• Las facultades de la asamblea son el resultado de la evolución de ese órgano a partir de su creación en el año de mil novecientos ochenta y siete. Cuando inició sus tareas, la entonces Asamblea de Representantes tenía un nivel jerárquico inferior al de los Congresos Locales del país, ya que si bien desde su creación ha constituido un órgano de representación ciudadana,

---

[7] Publicada en la página ciento treinta y dos, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido: "El régimen de facultades expresas que prevalece en el orden constitucional mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en el artículo 122 de la Carta Fundamental se establezcan con determinadas palabras sacramentales las atribuciones de la autoridad, pues ello haría prevalecer un sistema de interpretación literal que no es idóneo por sí solo para la aplicación del derecho y que desarticularía el sistema establecido por el poder revisor de la Constitución, al asignar facultades a la asamblea de representantes con la coexistencia de las atribuciones del Congreso de la Unión y del referido órgano, para legislar en lo relativo al Distrito Federal. Por el contrario, es suficiente que de manera clara e inequívoca se establezcan dichas facultades."

en sus inicios sus facultades se limitaban a dictar bandos y ordenanzas, así como reglamentos de policía y buen gobierno, sobre lo cual se precisó que la asamblea fue creada, apoyada en el principio de la representación, actuando como gestor de la población del Distrito Federal, tal como se advierte de las reformas al artículo 73 de la Constitución General de la República, publicada el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en la que se establecieron las pautas para la reforma político-jurídica del Distrito Federal.

47. Luego, dado que no debe atenderse a la literalidad cuando se habla de "extinción de dominio", entonces, a fin de dilucidar a qué materia corresponde esa institución jurídica y, por ende, a qué órgano corresponde su regulación legal, debe tomarse como punto de referencia su naturaleza, misma que se encuentra en la materia penal, la materia civil e incluso la administrativa.

48. No se soslaya que, por disposición constitucional, la extinción de dominio es autónoma de la materia penal; sin embargo, tal circunstancia de que el artículo 22 constitucional disponga que el "procedimiento" de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo del "procedimiento" de materia penal, en modo alguno significa que, la institución misma de la extinción de dominio sea autónoma de la materia penal.

49. Ciertamente, lo dispuesto en la norma constitucional que coincide, en lo sustancial con el artículo 4 de la ley que se cuestiona, es que es el "***procedimiento***" de extinción de dominio lo que resulta ser *autónomo* del "***procedimiento***" o la "***acción***" que pudiera haberse iniciado en la vía penal, sin que ello signifique que la extinción de dominio pueda abstraerse de la "***materia***" penal, pues es evidente que es en ésta en donde se encuentra su fundamento, al ser en los ordenamientos penales donde se hallan descritos los tipos penales que describen los hechos ilícitos que pueden dar lugar a la extinción de dominio y es su existencia la que justifica el inicio de los procedimientos de extinción e incluso, su conclusión.

50. En efecto, la extinción de dominio es una institución jurídica híbrida, que conjuga elementos del derecho penal, del derecho civil y del derecho administrativo, pero que tiene una finalidad distinta de la que se persigue en los juicios que corresponden a cada una de esas materias.

51. Al respecto, para realizar el estudio de los tópicos anunciados, es necesario empezar por definir en qué consiste la extinción de dominio, cuál es su naturaleza y su finalidad.

52. El Constituyente Permanente introdujo la institución jurídica de referencia, mediante la reforma al artículo 22 de la Constitución Federal, publi-

cada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, cuyo texto es el siguiente:

"**Artículo 22.** Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

"**No se considerará confiscación la aplicación** de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la **de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:**

"**I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal**;

"**II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes**:

"**a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió**.

"**b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.**

"**c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.**

"**d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos**

patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

"**III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes**."

53. En dicho artículo consta que la extinción de dominio tiene por objeto *privar del derecho de propiedad* a una persona, respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos de *delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas*, sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.

54. Ahora bien, para determinar su naturaleza y su finalidad, conviene analizar los procesos legislativos de la reforma al precepto constitucional en análisis. En la iniciativa presentada por el mismo Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de veintinueve de marzo de dos mil siete, se manifestó lo siguiente:

"Cámara de Origen: Diputados
"Exposición de motivos
"México, D. F., a 29 de marzo de 2007

"4. Iniciativa de diputado (Grupo Parlamentario del PRI)

"Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado **********, del Grupo Parlamentario del PRI **********, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:

"**Exposición de motivos**

"Es innegable que en la percepción de la sociedad mexicana, la delincuencia en el país ha alcanzado niveles alarmantes, pues no dejan de ocurrir acontecimientos violentos a consecuencia del **crimen organizado** en el territorio nacional.

"La seguridad pública es, sin duda, uno de los retos más importantes que tiene el Estado. La delincuencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia; ésta ha alcanzado un elevado grado de sofisticación, organización y equipamiento, que la fortalecen, haciendo más complejo su combate.

"Ante esta situación, las autoridades deben reaccionar firmemente, cuidando la implantación de figuras jurídicas modernas y eficaces de obvia legalidad.

"Este fenómeno delictivo emergente es consecuencia de la débil política social de prevención y de diversos factores que fomentan la realización de conductas delictivas.

"Es incorrecto considerar que figuras como la expropiación sean herramientas jurídicas para llevar a cabo aseguramientos o cualquier otro tipo de medida cautelar, pues no se deben mezclar instrumentos jurídicos de distinta naturaleza; en este caso, la administrativa con la penal.

"Asimismo, es necesario admitir que figuras jurídicas como el decomiso y el aseguramiento de los medios comisivos ya vigentes, son insuficientes para combatir de manera eficaz a la delincuencia.

"Se deben instrumentar una serie de mecanismos en aras de cubrir las diversas aristas del problema; uno de ellos es, precisamente, la extinción de dominio de bienes, esto es, la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, figura que debe ser analizada para efecto de valorar su pertinencia.

"Es pertinente la creación de figuras jurídico-penales *ad hoc* que atiendan este fenómeno, y que observen los principios de un sistema democrático de justicia penal.

"En este orden de ideas formulo una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 22, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura denominada 'extinción de dominio', que se sustenta en bases sólidas de un moderno derecho penal.

"...

"De prosperar este planteamiento se combatiría más eficazmente el crimen, se menguarían sus recursos materiales y económicos, observando

siempre el principio de legalidad y los específicos que deben estar presentes en un sistema garantista, respetuoso de los derechos de todas las personas, a fin de privilegiar el imperio del derecho en las acciones de justicia." (El énfasis es añadido)

55. Por su parte, el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, en lo que interesa, estableció lo siguiente:

"Con la extinción de dominio se buscó crear una figura más novedosa y menos complicada en su aplicación, que permita al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existan datos para acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, o que están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos.—Dicha modificación tiene como objetivo el enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo.—Cabe señalar que, en la actualidad, la suerte de los bienes instrumento, objeto o producto de un delito depende, en primer término, de que exista un aseguramiento. Asimismo, es indispensable esperar la declaratoria de responsabilidad penal plena de una o varias personas. Sin embargo, en ocasiones los bienes pueden no tener una relación directa con los procesados, aun cuando haya elementos para determinar que son instrumento, objeto o producto del delito, o están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de un delito.—En este sentido, con la finalidad de encontrar una herramienta eficaz que coadyuve a **desmembrar las organizaciones delictivas** y limitar sus efectos nocivos, impedir que se reproduzcan, pero principalmente decomisar sus activos, se considera necesario crear un procedimiento jurisdiccional y autónomo del proceso penal …" (El énfasis es añadido)

56. Asimismo, el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores estableció, en lo que interesa, lo siguiente:

"En efecto, estas comisiones comparten la idea de que para hacer prevalecer el Estado democrático de derecho en nuestro país, deben por un lado adecuarse las estructuras constitucionales y legales existentes, a fin de dar respuesta con mayor efectividad al grave fenómeno delictivo que nuestro país padece, sin conculcar los derechos fundamentales de las personas tutelados

en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

"... **es necesaria la incorporación de algunas reglas particulares aplicables a los casos de delincuencia organizada**, que vienen a constituir alguna restricción a las garantías, a efecto de atender puntualmente lo previsto por el artículo 1o. de la Constitución en el sentido de que las excepciones a los derechos fundamentales reconocidos por ella deben contenerse en la misma, consecuentemente, se incrementan las referencias a la delincuencia organizada a lo largo de los artículos de la parte dogmática, así que es pertinente, en aras de la claridad que debe tener la Norma Suprema, para hacerla asequible a cualquier habitante del país y entonces generar seguridad jurídica, establecer de manera general y explícita qué se entiende por delincuencia organizada.

"...

"La definición propuesta establece: 'Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.'

"Es importante considerar que esta definición contiene elementos que permiten distinguir este tipo de delito respecto de los tradicionales de asociación delictuosa, puesto que la finalidad de ésta es cometer los delitos previstos por la ley de la materia, no cualquier delito.

"En ese sentido es fundamental destacar que **el régimen de delincuencia organizada se crea para el tratamiento de un fenómeno muy particular de delincuencia**. Un fenómeno que por sus características especiales en la capacidad de operación de la organización, la sofisticación de sus actividades, el impacto social de los delitos que comete y, en general, su condición de amenaza en contra del Estado, requiere de un tratamiento especializado. **El régimen no se crea para facilitar las tareas del Ministerio Público en la persecución de delitos comunes**. De esta manera, **el régimen de delincuencia organizada no puede ser utilizado para la persecución de cualquier tipo de organización criminal, sino únicamente de aquellas que por sus características representen efectivamente un riesgo para el Estado**.

"...

"Es importante señalar que la Colegisladora señala en sus considerandos que **las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia**

organizada, están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad, y de ninguna manera podrán usarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas …

"'… Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en la necesidad de establecer nuevos elementos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y otorguen mejores mecanismos para el combate a la delincuencia organizada …'

"…

"Por lo que hace a la extinción de dominio, se buscó crear una figura novedosa y menos complicada en su aplicación, a fin de que permita al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existan datos para acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, o que están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos. Dicha modificación tiene como objetivo el enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo.

"Es necesario enfatizar que actualmente la suerte de los bienes instrumento, objeto o producto de un delito depende, en primer término, de que exista un aseguramiento, además de que se hacía necesario esperar la declaratoria de responsabilidad penal plena de una o varias personas, ello sin contar que en ocasiones los bienes podían no tener una relación directa con los procesados, aun cuando hubiese elementos para determinar que son instrumento, objeto o producto del delito, o están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de un delito.

"En este sentido, con la finalidad de encontrar una herramienta eficaz que coadyuve a desmembrar las organizaciones delictivas y limitar sus efectos nocivos, impedir que se reproduzcan, pero principalmente decomisar sus activos, se comparte el criterio de la Cámara de Origen de considerar necesario crear un procedimiento jurisdiccional y autónomo del proceso penal que establezca en forma expresa que procederá estrictamente en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, así como trata de personas …" (El énfasis es añadido)

57. Finalmente, en la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Senadores el trece de diciembre de dos mil siete, algunos senadores puntualizaron lo siguiente:

"Se establecen figuras que vienen del derecho comparado, como la extinción del dominio. Porque no podemos seguir tolerando y permaneciendo impasibles los legisladores, cuando vemos que día con día se detienen a los grandes capos de la droga; se van a prisión, pero mantienen su imperio económico intocable.

"Por eso proponemos, nuevamente **bajo control judicial**, la figura de la extinción del dominio, y realmente con la fuerza de la ley, desmembrar realmente estas bandas".[8]

58. En los procesos legislativos se advierte que el Constituyente Permanente introdujo en la Constitución la institución de la extinción de dominio como un "*régimen de excepción*", dentro de un paquete de reformas dirigidas a enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo; asimismo, se consideró como uno de los objetivos de dichas reformas, que los recursos obtenidos con el ejercicio de esas medidas, sirvieran para implementar un sistema de justicia restaurativa en favor de las víctimas y de los ofendidos.

59. Para cumplir con ello y dada su excepcionalidad, se estimó necesario que el ejercicio de la acción correspondiente, a cargo del Ministerio Público, se verificara en supuestos delimitados que, incluso, se introdujeron en la propia Norma Fundamental, para lo cual se partió de la base de que el imperativo fue combatir a la delincuencia cuya capacidad de operación, organización y sofisticación de sus actividades, genera un impacto social por el tipo "***de los delitos que comete***" y, en general, aquel cuya condición de amenaza en contra del Estado, requiere de un tratamiento especializado.

60. Fue sobre esas bases, que el legislador en el artículo 22 constitucional, al enunciar los casos en que procede la extinción de dominio, estableció un catálogo de delitos ciertos y bien especificados; asimismo, precisó los bienes sobre los que podría ejercerse tal acto privativo y el tipo de procedimiento a seguir.

---

[8] C. Senador **********.

61. Los delitos que dan lugar a la extinción de dominio son:

• Delincuencia organizada;

• Delitos contra la salud;

• Secuestro;

• Robo de vehículos; y,

• Trata de personas.

62. Los bienes sobre los que procede extinguir el dominio son:

• Los que sean instrumento, objeto o producto del delito;

• Los que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito;

• Los que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; y,

• Los que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

63. En lo así dispuesto se advierte que la extinción de dominio es una institución híbrida, que conjuga elementos del derecho penal, del derecho civil y del derecho administrativo, pero que tiene una finalidad distinta de la que se persigue en los juicios que corresponden a cada una de esas materias.

64. Así, los procesos penales tienen por objeto *sancionar al responsable* por la comisión de un delito, mediante diversos tipos de penas, la principal, la pena privativa de libertad, mientras que la extinción de dominio no está interesada en determinar quién es el responsable en la comisión de los delitos, sino en privar a la delincuencia organizada de sus bienes, y aplicarlos en favor del Estado.

65. La extinción de dominio no se trata de una pena, es una institución independiente del proceso penal pues mientras que éste se encarga de sancionar al sujeto que ha cometido el ilícito, la extinción de dominio se encuentra desprovista de carácter punitivo, no está supeditado a la demostración de la responsabilidad penal de una persona pudiendo ejercerse independientemente de un proceso penal.

66. No obstante lo anterior, es innegable que en los términos en que tal institución se encuentra regulada en nuestro orden jurídico, su origen está intrínsecamente vinculado con el derecho penal, en razón y medida de que está sujeta a la verificación de uno de los hechos ilícitos, descrito en los tipos penales que han quedado enunciados, e incluso, se puede ver afectado si, en aquel proceso criminal se resuelve la no acreditación del delito.

67. Por otra parte, si bien es cierto que la autonomía del proceso penal que le otorgó la Constitución a la acción de extinción de dominio, ha acercado su procedimiento a las reglas del proceso civil, no por ello puede afirmarse que se trata de una acción civil, en virtud de que el derecho civil, como base del derecho privado, tiene por objeto regular intereses particulares, lo que no es materia de debate en el procedimiento de extinción de dominio en donde el Estado pretende extinguir el dominio que un particular tiene sobre ciertos bienes, situación que lo dota de ciertos elementos administrativos.

68. Al respecto, aun cuando este Alto Tribunal ha establecido que los órganos del Estado pueden acudir al amparo cuando no actúan con el carácter de autoridad, sino que están colocados a un nivel de coordinación con los particulares, también lo es que aun cuando la extinción de propiedad derivada del ejercicio de la acción de extinción de dominio, deriva de una sentencia, la acción de extinción de dominio no es equiparable a una acción regulada por el derecho civil y, en ese sentido, debe afirmarse que: no por la circunstancia de que *el procedimiento* deba seguirse conforme a las reglas de los procedimientos civiles, la naturaleza de la acción se torna civil.

69. En efecto, la acción de extinción de dominio sólo la puede ejercer el Estado, no es accesible a los particulares. Su objeto tampoco persigue intereses particulares, sino que por el contrario, persigue intereses de orden público. Lo que el Estado pretende mediante el ejercicio de la acción de extinción de dominio es extinguir el derecho de propiedad del titular afectado, para apropiarse de la titularidad del bien objeto de la acción, para cumplir con una finalidad de orden público: debilitar a la delincuencia organizada en sus recursos económicos, así como, destinar el bien a usos de utilidad pública.

Esos elementos se identifican con el ámbito administrativo, aunque respecto de éste, guarda importantes diferencias.

70. Ciertamente, el derecho administrativo tiene por objeto regular las relaciones entre el Estado, como entidad soberana, y los particulares. A ello obedece que sea en el marco del derecho administrativo que el Estado pueda expropiar con fines de utilidad pública y pueda sancionar a los particulares cuando incurran en el incumplimiento de sus deberes, ya sea mediante la imposición de multas, la clausura de establecimientos, la terminación de permisos o concesiones, o la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos, por mencionar sólo algunos ejemplos; sin embargo, la extinción de dominio a cargo del Estado no se verifica *propria auctoritate*, antes bien, para su verificación necesariamente debe ventilarse en un procedimiento jurisdiccional, en el que autoridad y gobernado intervienen en un plano de igualdad y, en el cual, deben respetarse las formalidades esenciales de todo procedimiento.

71. Por ello, se afirma que la extinción de dominio es una institución híbrida, que involucra elementos del derecho penal y del derecho civil, cuya legitimación para ejercer la acción se encuentra reservada al Estado y, cuya esencia está dirigida a ser una herramienta eficaz en el combate a la delincuencia.

72. De todo lo anterior, se obtiene una primera conclusión: la extinción de dominio, si bien no constituye una materia específica ni corresponde en sus términos y de manera específica a alguna de las materias civil, penal o administrativa, sí **contiene** elementos que la identifican con aquéllas y, en consecuencia, es válido sostener que la competencia de la Asamblea Legislativa para el Distrito Federal para normar está dada en lo dispuesto en la base primera, fracción V, inciso h), del artículo 122 constitucional que la faculta para legislar en las materias civil y penal.

73. Así las cosas, una vez agotados los dos primeros pasos del test, corresponde verificar que se satisfaga el tercero de ellos, atinente a la **regularidad**, en el que debe analizarse si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ejerció la competencia que le correspondía, sin violentar la esfera de competencias que otros órganos o poderes del mismo ámbito tienen previsto para el ejercicio de sus funciones.

74. En relación con esto, según lo que hasta aquí se ha desarrollado, para efectos de las competencias y las facultades que otorga la Norma Fundamental al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal, no hay una materia que se identifique como "*extinción de dominio*", antes bien, para dilucidar a quién corresponde legislar sobre esa institución debe atenderse a su naturaleza que, como ya se dijo, está en los ámbitos penal, civil y administrativo, siendo en el primero de ellos donde encuentra su génesis, pues no puede pasarse por alto que según las razones dadas por el legislador en la exposición de motivos que explica su incorporación al sistema jurídico mexicano, se trata de un régimen excepcional establecido para combatir a la delincuencia cuya capacidad de operación, organización y sofisticación de sus actividades genera un impacto social por el tipo "***de los delitos que comete***" (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas) y cuya condición constituye una amenaza en contra del Estado, de manera que es la existencia de esos delitos la que justifica el inicio de los procedimientos de extinción. Entonces, al tratarse de una figura ligada a la comisión de esos precisos ilícitos cuya persecución puede corresponder en ciertos casos al orden local y, en otros, al orden federal, es a la competencia para legislar en esos delitos a lo que hay que atender para conocer a quién corresponde la regulación legislativa de la extinción de dominio, al ser ésta una consecuencia de la comisión de aquéllos y en virtud de la cual, el Estado solicita a un Juez que se apliquen en su favor, bienes cuyo dominio se declare extinto en la sentencia y la víctima del delito puede obtener, efectivamente, la reparación del daño.

75. En términos del artículo 73 constitucional corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre cuatro de los delitos que pueden dar lugar a la extinción de dominio (delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y delitos contra la salud); sin embargo, esa circunstancia no lleva a sostener que su regulación es exclusivamente de competencia federal, por dos razones, primero, porque no se está en el supuesto de legislar en materia de delitos en el ámbito sustantivo y, segundo, porque la competencia de la asamblea tiene que ser vista en sus dos posibles vertientes, tanto la normativa, como la operativa.

76. En cuanto a lo primero, si bien conforme al marco constitucional vigente, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia sustantiva de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y delitos contra la salud, lo definitivo es que la emisión de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal no corresponde a un ejercicio legislativo sobre dichas materias si se toma en cuenta que, lo que ahí se regula es el procedimiento que ha de seguirse para obtener la declaración de la extinción de un derecho real sobre los bienes que la propia Norma Constitucional describe y su adjudicación a favor del Estado.

77. Por lo que ve a lo segundo, la competencia de la Asamblea Legislativa puede darse tanto en una vertiente normativa, como en una operativa. En la normativa, se ubica la facultad de legislar sobre aspectos sustantivos como es el caso del delito de robo de vehículos, en tanto que a la operativa corresponden los delitos que pueden ser concurrentemente perseguidos, juzgados y condenados, como lo son: narcomenudeo, trata de personas y secuestro.

78. Así, al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2010, sesionada el veintiocho de junio de dos mil once, el Tribunal Pleno interpretó el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución General, en los términos siguientes: "Del proceso legislativo en cuestión, se advierte que el objetivo de la reforma constitucional que adicionó un párrafo al artículo 73, fracción XXI, constitucional, fue permitir que las autoridades locales participaran en la persecución de delitos previstos en las leyes generales, relativas a las materias concurrentes que prevé la Constitución". Luego, se dijo, se trata de una habilitación para que las leyes generales establezcan los supuestos en los que las autoridades locales podrán perseguir los delitos en ellas tipificados, lo que implica que en este esquema corresponde a las leyes generales establecer los tipos penales y las hipótesis en que deberán ser perseguidos localmente, en el entendido de que las normas procesales para su conocimiento y persecución, así como las normas sustantivas distintas al establecimiento del tipo, como por ejemplo, las relativas a conexidad o individualización de penas, seguirán siendo las expedidas por las entidades federativas.

79. En el caso, cuando se emitió la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal en diciembre de dos mil ocho, el esquema de distribución competencial de los delitos sobre los que trata o se aplica era distinto. Si bien, la delincuencia organizada ya estaba federalizada desde el dieciocho de junio de dos mil ocho, ni el delito de trata de personas ni el de secuestro se habían convertido en concurrentes "operativamente", mediante la facultad constitucional de emitir leyes generales por el Congreso de la Unión; esto lo hizo el Congreso de la Unión tratándose del secuestro, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil nueve; y el delito de trata de personas, el catorce de julio de dos mil once.

80. Es relevante mencionar que del contraste de los catálogos constitucional y el del artículo 4 de la ley local, únicamente el delito de delincuencia organizada queda fuera de la competencia de ese órgano legislativo local, sea normativa o sea operativa, del Distrito Federal.

81. Luego, en la medida en que el Distrito Federal tiene competencia para conocer de los delitos mencionados, con excepción del delito de delin-

cuencia organizada, debe entenderse que también está facultado para legislar en lo relativo a la figura de extinción de dominio, que si bien es autónoma de los procesos penales respectivos, guarda relación con los mismos en tanto es su existencia la que justifica el inicio de los procedimientos de extinción e inclusive, en el caso de que se dicte un fallo absolutorio por no acreditarse los elementos del cuerpo del delito, su conclusión; de ahí que deban desestimarse, por infundados, los motivos de agravio expresados en torno al tema de la incompetencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de extinción de dominio.

82. **II.** Por otra parte, en cuanto a los argumentos que la peticionaria de garantías expresa en relación a que la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal es inconstitucional, por no constar las firmas de los integrantes o representantes del órgano legislativo, del jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni del secretario de Gobierno del Distrito Federal, es infundado atento a las consideraciones siguientes:

83. A fin de poner de manifiesto lo anterior, es menester acudir a los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, 67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que a la letra establecen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 122. …

"…

"C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

"…

"Base segunda. Respecto al jefe de Gobierno del Distrito Federal:

"…

"II. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

"...

"b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal."

A su vez, el **Estatuto de Gobierno del Distrito Federal**:

"Artículo 67. Las facultades y obligaciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:

"…

"II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos."

"Artículo 90. Los reglamentos, decretos y acuerdos del jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán estar refrendados por el secretario que corresponda según la materia de que se trate."

84. De lo expuesto se advierte, que el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), constitucional, otorga facultades al jefe de Gobierno del Distrito Federal para promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos, lo que se reproduce en el artículo 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el cual en el numeral 90 se prevé que los reglamentos deberán estar refrendados por el secretario que corresponda, según la materia de que se trate.

85. Ahora bien, en el caso de Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ocho de diciembre de dos mil ocho, textualmente se aprecia lo siguiente:

"En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito

Federal, para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto promulgatorio en la residencia oficial del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil ocho.—El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon.—Firma.—El secretario de Gobierno, **********.—Firma."

86. De lo expuesto se advierte que contrariamente a lo afirmado por la peticionaria de garantías el ordenamiento legal invocado está firmado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el secretario de Gobierno; de ahí lo infundado del concepto de violación a estudio.

87. **III** En otro orden de ideas, se analizarán los conceptos de violación que la peticionaria de garantías hace valer en relación a que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, no está legitimado para ejercer la acción de extinción de dominio, porque en esa legislación se otorga a la Agencia del Ministerio Público Especializada en el Procedimiento de Extinción de Dominio, a través de los agentes del Ministerio Público Especializado que le estén adscritos, de conformidad con los artículos 29 y 32 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, así como el tercero, fracción III, del acuerdo A/005/09 de treinta y uno de marzo de dos mil nueve.

88. Tales aseveraciones son infundadas por lo siguiente:

89. En efecto, no debe soslayarse que una es la *legitimatio ad causam* y otra la *legitimatio ad processum*. La primera, es un presupuesto material de la sentencia favorable vinculado a la personería sustantiva y, la segunda, es un presupuesto procesal referido única y exclusivamente a la capacidad para comparecer al proceso; luego, al tratarse de cuestiones diferentes, merecen también diverso trato: la *legitimatio ad processum* se estudia por el Juez al admitir la demanda y la legitimación en la causa, como fenómeno de fondo que es, se evalúa en la sentencia.

90. Ahora bien, en el caso que se examina, contrariamente a lo que sostiene la quejosa, la circunstancia de que en el procedimiento de extinción de dominio de los bienes cuyo dominio se declare extinto deban pasar a favor del Gobierno del Distrito Federal es, precisamente, lo que lo legitima para incoar acción en contra del afectado (legitimación en la causa), esto, a través de la dependencia que el órgano legislativo local designó para fungir como su representante en este tipo de procesos, esto es, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a través del agente del Ministerio Público de esa institución especializado en el procedimiento de extinción de dominio (legitimación en el proceso).

91. Esta conclusión se obtiene a partir de una interpretación sistemática del cuerpo normativo aplicable al caso, cuyos artículos 4 y 50, así como el tercero transitorio, disponen:

"Artículo 4. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes mencionados en el artículo 5 de esta ley, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita.

"...

"Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Distrito Federal y serán destinados al bienestar social, mediante acuerdo del jefe de Gobierno que se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Cuando se trate de bienes fungibles se destinarán en porcentajes iguales a la procuración de justicia y la seguridad pública. ..."

"Artículo 50. El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia del procedimiento cuando:

"...

"Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, y en los supuestos de los dos párrafos anteriores, el Juez fijará su importe en cantidad líquida o por valor equivalente en especie, y se ordenará el remate de los bienes para su cumplimiento, pero se permitirá que el Gobierno del Distrito Federal pueda optar por pagar a los terceros, víctimas u ofendidos para conservar la propiedad de los bienes."

"Tercero. El jefe de Gobierno del Distrito Federal cuenta con 60 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento del presente ordenamiento."

92. Con la lectura de tales disposiciones se advierte que, de acuerdo con la normatividad local para el Distrito Federal, sobre la extinción de dominio, es a favor del Gobierno del Distrito Federal que se aplicarán los bienes cuya propiedad se extinga en el juicio de que se trata e, incluso, se le otorga la potestad de hacer los pagos a terceros sobre los gravámenes que pesen sobre

el inmueble, la reparación por concepto de daños y perjuicios que pudieran surgir a favor de las víctimas u ofendidos, así como otros gastos derivados de la extinción del dominio, para conservar la propiedad del bien; de ahí que no exista razón fundada para negar la existencia de una legitimación en la causa para comparecer a juicio cuando es evidente que es el Gobierno del Distrito Federal el que está interesado en que se estime fundada la pretensión.

93. Ahora bien, lo trascendental en este tema es que dicha comparecencia se verifique a través del preciso órgano que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha facultado para tal efecto y que, en el caso, corresponde al agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio, al que la propia ley le otorga la calidad de parte en el juicio; de ahí que si, en el caso específico, fue el agente del Ministerio Público encargado de esa área el que activó la maquinaria judicial, en representación del Gobierno del Distrito Federal, no puede afirmarse que se haya transgredido algún derecho de la quejosa.

94. Así, en virtud de que esta Primera Sala llegó a la conclusión de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sí tiene facultades para legislar en materia de extinción de dominio y que dicho ordenamiento es constitucional, corresponde analizar el concepto de violación, consistente en que, incorrectamente, la Sala responsable estimó que a ella le correspondía probar que ignoraba que en el inmueble materia del juicio natural se realizaban conductas contrarias a derecho, para lo cual, en primer orden, se explica cómo debe interpretarse el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Interpretación del artículo 22 de la Constitución Federal, en lo que se refiere a la acción de extinción de dominio.

95. Los procesos legislativos que se han relacionado en párrafos anteriores, permiten observar que el Constituyente Permanente partió de dos premisas claramente identificables, al incorporar a nuestro sistema jurídico la institución de la extinción de dominio.

(i) Por un lado, manifestó que la extinción de dominio tiene por objeto introducir un *régimen de excepción* para combatir a la delincuencia organizada por la comisión de cinco delitos precisos (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas).

(ii) Por otra parte, consideró que dicho régimen de excepción debía *aplicarse en forma restrictiva* y, por tanto, no debía ser utilizado en forma arbitraria para afectar a personas, propietarios o poseedores de buena fe.

96. A continuación, se desarrollan ambas premisas.

1) La extinción de dominio como figura de combate eficaz a la delincuencia organizada, por la comisión de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

• Tal como se indicó, en los procesos legislativos consta que el Constituyente Permanente introdujo a la Constitución la extinción de dominio como un "régimen de excepción", dentro de un paquete de reformas dirigidas a dar un *trato especial a cierto tipo de delincuencia*.

• Tan es así, que en la misma reforma que incorporó al Texto Constitucional la figura de la extinción de dominio se hicieron múltiples modificaciones al Texto Constitucional que incorporaron un trato especial dirigido al combate efectivo a la *delincuencia organizada*.[9]

[9] "**Artículo 16.** … La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de **delincuencia organizada**, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
"… Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como **delincuencia organizada**. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal."
"**Artículo 18.** … Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de **delincuencia organizada** y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
"Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de **delincuencia organizada** se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por **delincuencia organizada** con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley."
"**Artículo 19.** … El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de **delincuencia organizada**, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

• En efecto, el Constituyente Permanente se refirió, en forma reiterada, a la necesidad de contar *con herramientas especiales*, para combatir un *tipo especial de delincuencia* que ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades, que se distingue por sus características especiales en su capacidad de operación, la sofisticación de sus actividades, **el impacto social de los delitos que comete** y su condición de amenaza en contra del Estado. Fue en ese sentido que se identificaron cinco delitos específicos.

• Asimismo, el Constituyente Permanente se manifestó en cuanto a que los procesos penales vigentes no son eficaces para afectar a la delincuencia organizada en su *patrimonio*. Lo cual es indispensable para debilitar su estructura, aumentar sus costos, reducir sus ganancias, dificultar su operación y afectarlo de manera frontal.

• Señaló que, por regla general, los bienes que las bandas criminales utilizan para la comisión de los delitos no están a nombre de los procesados, y aun cuando sea evidente que se utilizan como instrumento para el delito o que son producto de las operaciones delictivas, debido a esa falta de relación directa con los procesados, el Estado no puede allegarse de ellos.

• Por lo anterior, el Constituyente Permanente consideró necesario introducir la "extinción de dominio", como una figura jurídica novedosa, la cual,

---

"… Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por **delincuencia organizada** el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro Juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal."

"**Artículo 20. … B.** De los derechos de toda persona imputada:

"… **III.** A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de **delincuencia organizada**, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

"La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de **delincuencia organizada**;

"V. … En **delincuencia organizada**, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

"...

"C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

"...

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o **delincuencia organizada**; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa."

no tuviera por objeto sancionar al responsable, sino que estuviera dirigida al apoderamiento de los bienes que son instrumento y producto del delito.

• En conclusión, **la regulación de la figura de extinción de dominio tuvo por objeto** adecuar las estructuras constitucionales y legales para **combatir en forma *eficaz* a la delincuencia organizada**, por la comisión de cinco delitos precisos, al considerar que los mecanismos que existían con anterioridad eran insuficientes.[10]

2) Utilización restrictiva de la figura de extinción de dominio.

• Con la misma intensidad que el Constituyente Permanente enfatizó la especial naturaleza de la acción de extinción de dominio, los objetivos que persigue, así como su autonomía del proceso penal, también destacó que *dicha acción debe ejercitarse con absoluto respeto a la legalidad, a la garantía de audiencia y debido proceso*.

• Manifestó que un modelo eficaz no puede estar sustentado de manera exclusiva en mayores facultades para las autoridades policiales sin control alguno; sino que, en todo caso, debe contar con los equilibrios propios e indispensables que exige la justicia y, en general, un Estado democrático de derecho.

• Se señaló expresamente que la acción de extinción de dominio no puede proceder en contra de personas, propietarios o poseedores de buena fe, con el objeto de que no se incurra en arbitrariedades.

• Se recalcó que **el objetivo es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, para debilitarla económicamente**. Que la acción de extinción de dominio se crea para combatir a la delincuencia organizada, para el tratamiento de un fenómeno muy particular de delincuencia, que por sus características especiales, en la capacidad de operación de la organización, la sofisticación de sus actividades, el impacto social de los delitos que comete (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas) y, en general, su condición de amenaza en contra del Estado, requiere de un tratamiento especializado; por lo que *no se pretende que sea aplicada indiscriminadamente a otro tipo de conductas*.

[10] Exposición de motivos presentada a la Cámara de Senadores por el Ejecutivo Federal el trece de marzo de dos mil siete.

• El Constituyente destacó que "*el régimen de delincuencia organizada se crea para el tratamiento de un fenómeno muy particular de delincuencia … que no debe utilizarse para facilitar las tareas del Ministerio Público en la persecución de delitos comunes*", sino sólo para combatir a las bandas delincuenciales que, debido a su nivel de organización, sofisticación y equipamiento, representan un riesgo para el Estado.

• De manera que insistió en que el ejercicio de la acción de extinción de dominio no debe conculcar los derechos fundamentales de las personas tuteladas en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

• Por lo tanto, partiendo de que el combate a la delincuencia organizada, dado el alto grado de sofisticación que ha alcanzado, requiere de medidas especiales, el Constituyente Permanente introdujo una figura que no está encaminada a determinar la culpabilidad del probable responsable y su sanción penal, sino, en esencia, el apoderamiento de los bienes de que se sirve para delinquir.

• Dado que tal herramienta está dirigida a su patrimonio, y no a la persona, el Constituyente Permanente estableció que no se requiere esperar a una sentencia que determine la culpabilidad penal del inculpado, sino que basta que se aporten al juicio "*suficientes elementos*" respecto de la existencia del *hecho ilícito* que se adecúa a la descripción normativa de los delitos a que alude el artículo 22 constitucional y el involucramiento de los bienes, para que la acción proceda.

• Esto es, el Constituyente admitió que la incorporación de dicha institución generaba "alguna restricción" a las garantías individuales.[11] Sin embargo, no debe pasar inadvertido que también aclaró que *dichas restricciones eran solamente aplicables a los miembros de la delincuencia organizada*, debido a la sofisticación de dichas organizaciones y a la dificultad en su combate.

• Fue claro en establecer que, por tratarse de un régimen de excepción, no debía utilizarse para perjudicar a personas de buena fe, para no incurrir en arbitrariedades, ni debía utilizarse para facilitar las tareas del Ministerio Público en la persecución de los delitos comunes

• Si bien el Constituyente Permanente señaló que el objetivo de la acción de extinción de dominio es que el Estado tenga una herramienta eficaz en contra de la delincuencia organizada, también estableció que esa herramienta

[11] Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales (párrafo 52).

no puede convertirse en un instrumento que justifique actuaciones arbitrarias del Estado, sino que, en todo caso, deben respetarse las *garantías mínimas* a favor de los gobernados, esto, al margen de que precisó que los recursos obtenidos tendrán como uno de sus objetivos principales la implementación de una justicia restaurativa.

97. El análisis de las dos premisas en que se sustenta la acción de extinción de dominio permite afirmar que el Constituyente Permanente buscó, en todo momento, un equilibrio entre el respeto a las garantías individuales, la seguridad pública y la justicia penal: de ahí que deba excluirse que la acción de extinción de dominio no tiene por objeto *anular* o vaciar de contenido las mencionadas garantías. Por tanto, la interpretación del artículo 22 constitucional no debe hacerse al margen de aquéllas, sino que, por el contrario, debe complementarse con las mismas, en la medida en que no se impida su objetivo, sobre todo, cuando pueden estar involucradas personas de buena fe.

98. Por lo anterior, atendiendo a los conceptos de violación de la parte quejosa, corresponde a esta Primera Sala determinar, primero, qué debe entenderse por la "acreditación del hecho ilícito" constitutivo de los delitos contra la salud, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y robo de vehículos, en segundo lugar, cuáles son los alcances de la autonomía entre el proceso penal y el de extinción y, finalmente, resolver si la interpretación que realizó la autoridad responsable, en torno a las cargas probatorias que se desprenden del artículo 22 constitucional, es correcta.

99. La fracción II del artículo 22 de la Constitución Federal dispone que la acción de extinción de dominio procede en los casos siguientes:

"II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

"a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

"b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

"c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

"d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño."

100. De dicha fracción se obtienen estas premisas:

1) La acción de extinción de dominio sólo procede respecto de bienes que han sido *instrumento*, objeto o producto de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.[12]

2) Al ejercer su acción, el Estado debe aportar al juicio de extinción de dominio "elementos suficientes" para acreditar, en *primer lugar*, que tuvieron lugar los ***hechos ilícitos*** que se adecúan a la descripción normativa de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, en *segundo lugar*, que los bienes objeto del juicio fueron *instrumento, objeto o producto* de los delitos citados y, en *tercer lugar*, en el supuesto de que los bienes se hayan utilizado para la comisión de delitos por parte de un tercero, aportar datos que razonablemente permitan sostener **que ello se haya dado con conocimiento del propietario de los bienes**, hipótesis que se desarrollará con mayor detenimiento al abordar las cargas probatorias relativas al "tercero de buena fe".

101. A continuación, se explicarán los elementos sustanciales de dichas proposiciones:

(a) Hecho ilícito

102. Según el *Diccionario Esencial de la Lengua Española* "*hecho*" es una acción u obra. Es la cosa que sucede.[13]

---

[12] **Cabe precisar que la fracción II del artículo 22 constitucional enumera y ejemplifica, en sus diversos incisos, varias hipótesis de uso de los bienes, tales como "*que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito*" o "*que hayan sido utilizados para la comisión de delitos*". Para evitar repeticiones innecesarias**, las referencias que se hagan en el presente estudio a los bienes como "instrumento" del delito, se entenderá que engloban las diferentes hipótesis a que se refieren todos los incisos de la fracción II citada.

[13] "**Hecho, cha.** Part. Irreg. De hacer. II. I. Adj. 1. Acabado, maduro. *Hombre, árbol, vino hecho*. II 2. Semejante (II que semeja). *Hecho un león, Un basilisco. Hecha una fiera*. 3. Dicho de una persona: constituida (II compuesta). *Personas mal hechas*. II. II. M. 4. Acción u obra. II 5. Cosa

103. En el campo del derecho –*hecho jurídico*– es la actividad o acontecimiento que produce un resultado con consecuencias jurídicas, puede ser lícito o ilícito.

104. Lícito, lo que no es contrario a los postulados normativos. Ilícito es lo prohibido legalmente.[14] La esencia real de lo ilícito es la lesión de los intereses jurídicamente protegidos.

105. Don Francisco Pavón Vasconcelos, en su obra "*Diccionario de Derecho Penal*", lo define de la siguiente manera:

"*Hecho. Si bien en sentido lato por 'hecho' se entiende al delito en el conjunto de sus elementos objetivos y subjetivos, es pertinente hacer la distinción entre el hecho, como delito, del hecho como una parte de él, empleado este último término como sinónimo de acto, acción o conducta, criterio por demás aceptado en forma general por los autores de la materia. En efecto, recordemos que Cavallo expresó que el término hecho tiene un significado amplio, comprensivo de todos los elementos que realizan el tipo penal, y el técnico o restringido que se refiere a los elementos materiales del tipo (consúltense Cavallo, Manuale Diritto Penale, Parte Generale, VII, págs. 136-137, Napole, 1955 y Remo Pannain, Manuale, Vol. I, pág. 170, Torino). Desde un punto de vista lógico, antes de un resultado concreto se da un proceder humano, sea éste positivo o negativo, al cual se suma, en algunos casos, un resultado causal configurativo del hecho mismo*

---

que sucede. II 6. Asunto o materia de que se trata. II hecho. Interj. Se usa para expresar asentimiento o conformidad. *¿Vienes mañana a cenar*? –Hecho. II –consumado. M. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. II hecho de armas. M. Hazaña o acción señalada en la guerra. II hecho imponible. M Der. Situación o circunstancia que origina la obligación legal de contribuir y sobre la que se aplica el tributo. II –jurídico. M. Der. El que tiene consecuencias jurídicas. II –probado. M. Der. El que como tal se declara en las sentencias. Hechos de los Apóstoles. M. pl. Quinto libro del Nuevo Testamento, escrito por San Lucas. II a hecho. Loc. Adv. En conjunto, sin distinción ni diferencia. *Corta de árboles por entresaca o a hecho*. II de hecho. I. Loc. Adv. 1. Real y verdaderamente. *De hecho las venas no laten*. II 2. De veras, con eficacia y buena voluntad. *Esta ley tiene de hecho una aplicación menor*. II. II. Loc. Adj. 3. Que no se ajusta a una norma o prescripción legal previa. *Situación de hecho*. U. t.c. loc.adv. *No esperaremos una resolución, procederemos de hecho*. II de hecho y de derecho. Loc. Adj. Que, además de existir o proceder, existe o procede legítimamente. *Era grande de España de hecho y de derecho*. II eso está –Expr. Coloq. Se usa para indicar que algo se puede considerar tan seguro como si ya se hubiera realizado. II –y derecho, cha. Loc. Adj. 1. Dicho de una persona: Cabal, excelente. II 2. Dicho de una cosa: ejecutada totalmente. II ya está hecho. Expr. Se usa para manifestar conformidad con algo ya irremediable. V. frase –ropa–.". "***Diccionario Esencial de la Lengua Española", Real Academia Española, página 763***.

[14] "**Ilícito, ta.** I. Adj. 1. No permitido legal o moralmente. II II. M. 2. Mex. Delito (II culpa, quebrantamiento de la ley). V. acto –causa–.". "***Diccionario Esencial de la Lengua Española", Real Academia Española, página 802***.

que al adecuarse a la hipótesis legal, resulta típico. Por ello en un orden de prelación lógica primero se da la conducta o el hecho y después su tipicidad, para a continuación calificar la conducta o hechos típicos mediante una valoración tanto objetiva como subjetiva (antijurídica y culpable), para, por último integrar la noción del delito mediante la concurrencia de la punibilidad. Es pues importante la terminología a emplearse para denominar al primer elemento del delito en el orden de prelación lógica de los mismos. Unos le denominan acción, término genérico comprensivo de la acción en sentido estricto y de la omisión; otros autores prefieren hablar de conducta y dentro de ésta examinan la acción y la omisión, así como el resultado; otro más emplean el término hecho y, en fin, otros una doble terminología, según las exigencias típicas: conducta o hecho, ya sea que la norma describa un mero comportamiento o bien agregue, en la descripción típica, un resultado material concreto. Jiménez de Asúa prefiere la expresión acto, al considerar inaceptable e inconveniente hablar del hecho, por resultarle este término demasiado genérico, pues con él, como ya lo había señalado Binding, se designa todo acontecimiento, nazca de la mano de la mente del hombre o acaezca por caso fortuito, mientras que por 'acción' se entiende la voluntad jurídicamente significativa; igualmente el propio autor rechaza el vocablo conducta, al considerar que se refiere 'a una actuación más continuada y sostenida que la de mero «acto psicológico» que … es el punto de partida para el juicio de reproche en que consiste la culpabilidad' (Tratado de Derecho Penal). Vol. III, págs. 331-334, Editorial Losada, Buenos Aires, 1976). Como es fácil advertir, cada autor prefiere usar, con relación al primer elemento objetivo del delito, el vocablo que pretende ser más adecuado a la sistemática previamente aceptada. Convencidos de que los términos empleados resultan, en general demasiado amplios o estrechos para el concepto que en ellos se trata de comprender, preferimos hablar de hecho, denominación genérica del comportamiento humano trascendente en el plan normativo, admitiendo que en ocasiones resulta correcto calificarlo de conducta, con expresa referencia a aquellos delitos en los cuales no existe, en función del tipo penal, la producción de un evento o un resultado material. Sobre este particular recordemos que Porte Petit estima que los términos adecuados son conducta o hecho, según la hipótesis que se presenta en el caso particular (Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal. Vol. I, pág. 287, Editorial Jurídica Mexicana, México, 1969). El propio Porte Petit hace hincapié en que, si el elemento objetivo del delito puede estar constituido por una mera conducta o un hecho, hipótesis ésta en la que se está en presencia de un delito material o de resultado, los términos adecuados son 'conducta' o 'hecho', según la hipótesis que se presente, pero ello no debe llevar forzosamente a precisar que se puede adoptar uno sólo de dichos términos, pues si se aceptara el término 'conducta', éste resultaría estrecho, pareciendo inapropiado su uso para los casos en que se estuviera en presencia de un resultado material consecuencia de la conducta; en tanto si se admitiera

el término 'hecho' tal expresión resultaría excesiva al comprender, además de la conducta, el resultado (Apuntamientos de la Parte General de Derecho Penal, Vol. I, pág. 293). Aclarado que el primer elemento objetivo del delito puede denominarse 'conducta' o 'hecho' según la hipótesis de que se trate en función del tipo penal, por hecho debemos entender aquella actividad o inactividad voluntarias que producen un resultado material como su efecto causal, resultando sus elementos: a) conducta; b) resultado y c) nexo de casualidad entre la primera y el segundo." (páginas 547 y 548)

106. Bien, el contenido del artículo 22 constitucional, resultado de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, alude a la acreditación del "***hecho ilícito***", acepción que también es empleada en la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y cuya existencia se configura como base central de la acción. La definición de este elemento es trascendental y tiene vinculación directa con el tema de la **autonomía**, que se entiende **relativa**, entre la persecución del delito y la acción de extinción de dominio.

107. El concepto de hecho ilícito a que se refiere la extinción de dominio, en términos normativos, no está disociado del origen eminentemente penal de la conducta delictiva que le da origen.

108. Al respecto, en lo que ve a la extinción de dominio en el Distrito Federal, la Ley de Extinción de Dominio, en su artículo 2o., fracción VIII, originalmente definía el hecho ilícito como:

"***Hecho ilícito:*** *Hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quién o quiénes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención*."

109. Con motivo de la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecinueve de abril de dos mil doce, se le atribuyó el concepto siguiente:

"**Hecho ilícito:** Hecho típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención."

110. Finalmente, la reforma de siete de mayo de dos mil catorce dio lugar a que dicha definición quedara en los términos siguientes:

"**Hecho ilícito:** Hecho típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de secuestro, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención."

111. Así, la referencia al hecho ilícito está asignada a un hecho que encuadra en alguno de los tipos penales que establece la Constitución Federal (típico), y que es contrario a derecho (antijurídico).

112. Lo que permite advertir la relación sustancial entre el derecho penal y la acción de extinción de dominio; de manera que ésta, por disposición constitucional, tiene su origen en la comisión de una conducta tipificada como delito por la ley penal y que, en el caso del Distrito Federal, se refiere exclusivamente a delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, es decir, se excluye la delincuencia organizada, por ser ésta de la competencia federal.

113. Además, esta referencia al vocablo hecho, relativo al considerado como delito por la ley penal, tiene un empleo común en las normas constitucionales y adjetivas que regulan nuestro sistema procesal penal, tal como se advierte en los artículos 16 y 19 constitucionales, en los que se hace referencia expresa al hecho ilícito.[15] De manera que el concepto de cuerpo del delito, utilizado en el sistema procesal penal tradicional mixto, ahora es denominado hecho ilícito, para referirse a la acción y omisión considerada como delito por la ley penal.

114. Así lo ha explicado esta Primera Sala en la jurisprudencia, cuyo rubro es: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS."[16]

---

[15] "**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. … No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un **hecho que la ley señale como delito**, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."
"**Artículo 19.** Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un **hecho que la ley señale como delito** y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión."

[16] Tesis 1a./J. 143/2011 (9a.), consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Primera Sala, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, cuyo texto es:

115. Por tanto, ante esta evidente vinculación que tiene la acción de extinción de dominio con la persecución del delito en términos de las leyes penales, ambos procesos tienen una **autonomía relativa**, pues es innegable que en lo que ve a las calificaciones del hecho ilícito (desvinculado de la responsabilidad del inculpado), ambos juzgadores (civil y penal) deben partir de la existencia del hecho ilícito, esto es, la acreditación de los elementos objetivos o materiales y normativos que configuran la descripción típica, considerada como delito por la ley penal y, por ende, contraria a derecho, tal como se analizará en el siguiente apartado:

(b) Autonomía relativa entre el juicio de extinción de dominio y la causa penal

116. El artículo 22 constitucional, en su párrafo segundo, fracción I, dispone:

"**Artículo 22.** …

"No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la

---

"Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso –fase preparatoria para el dictado de la sentencia– el Juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación –que sólo puede darse en sentencia definitiva– implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba."

decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. **En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:**

"**I.** Será jurisdiccional y **autónomo** del de materia penal."

117. Como se ve, el artículo constitucional es contundente en disponer que el proceso de extinción de dominio es jurisdiccional y **autónomo** del proceso penal; en tal virtud, la cuestión a dilucidar no es si existe o no tal autonomía, sino determinar cuáles son sus alcances, esto es, si existe una desvinculación **absoluta** entre ambos juicios o si ésta es **relativa**.

118. En el caso, la autonomía a que se refiere el artículo 22 constitucional debe entenderse como la independencia de aquel que juzga sobre el tema de la extinción de dominio sobre ciertos bienes por la comisión de uno de los delitos a que se refiere la propia norma constitucional y del que ha de emitir decisión, en cuanto a la responsabilidad de quien se encuentra sujeto al juicio penal. Esa autonomía involucra independencia en la normatividad que cada uno de ellos ha de aplicar en el proceso del que es rector, independencia en el desarrollo de cada uno de los juicios e independencia en la decisión que adopten sobre temas respecto de los cuales no compartan jurisdicción (básicamente la responsabilidad penal, por no ser éste un tópico sobre el que ambos Jueces deban decidir); sin embargo, tal separación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total; de manera que, por regla general, el Juez de extinción de dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el Juez especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución *intra* procesal que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva que el delito no se demostró.

119. Al respecto, se parte de la base de que, desde su génesis, ambos procesos tienen como denominador común los hechos que dieron origen a una averiguación previa que, una vez escindida da lugar a dos tipos de juicio: el *penal* (encaminado a la sanción por la comisión de delitos) y el de *extinción de dominio* (enderezado a declarar derechos patrimoniales), situación que impide afirmar la existencia de una autonomía absoluta, pues el propio artículo 22 constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sí.

120. En efecto, la disposición de que se trata prevé que la extinción de dominio procede respecto de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, "*aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió*". La redacción del artículo permite afirmar válidamente que el legislador partió de la base de que paralelamente al ejercicio de la acción penal, se ejercería la acción de extinción de dominio; de ahí que, en primer orden, el Estado (a través del Ministerio Público) habría de llevar a cabo las investigaciones para la persecución del delito e, incluso, en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal de contar con los elementos necesarios para ello, pues solamente así se explica la aclaración en el sentido de que la extinción de dominio procede "*aun cuando no se haya dictado*[17] (en el proceso penal) *la sentencia que determine la responsabilidad penal*", lo que supone que ha habido, al menos, una calificación a cargo de la autoridad judicial penal sobre la existencia de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional, como presupuesto para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, calificación que pudo obedecer a la petición de girar una orden de aprehensión en términos del artículo 16 constitucional,[18] al dictado del auto de formal prisión o a uno de sujeción a proceso, y por virtud de lo cual, debiera tramitarse un juicio en la vía penal y, en su momento, resolverse por el Juez competente.

121. En esas circunstancias, por regla general, **la acción de extinción de dominio está sujeta a que el Juez de la causa penal haya emitido alguna decisión (en orden de aprehensión o comparecencia, auto de formal prisión o de sujeción a proceso) en la que afirme que los hechos consignados por el Ministerio Público acreditan el cuerpo del delito de alguno de los ilícitos previstos en el artículo 22 constitucional**, a fin de dar seguridad jurídica desde el inicio del juicio de extinción de dominio.

122. Al respecto, no queda inadvertido que una decisión judicial de esa naturaleza está sujeta a que exista una consignación ante el Juez Penal, lo

---

[17] Una inferencia de tal aclaración llevaría necesariamente a afirmar que la sentencia penal habrá de dictarse en algún momento.

[18] "**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. … **No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.** …"

que supone que se conoce de la existencia de algún sujeto a quien se le imputa la comisión del delito; sin embargo, con el conocimiento de que existen casos en los que el Ministerio Público se encuentra imposibilitado para ejercer la acción penal, porque, a pesar de haber localizado bienes que, por ejemplo, se emplean como instrumento u objeto del delito e, inclusive, que son producto de aquél, se desconoce la identidad del probable responsable de su comisión, supuesto en el cual no sería posible ejercer la acción penal ni, por ende, obtener una resolución judicial, en la que se califique si los hechos consignados constituyen o no uno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional. En esas circunstancias, debe admitirse que tales casos constituyen una excepción a la regla y que, entonces, ante la falta de calificación del delito a cargo del Juez de la causa penal, corresponde al Juez de extinción de dominio, a partir de los elementos aportados por el Ministerio Público, resolver si con ellos se demuestra la comisión del hecho ilícito, en cuyo caso, el estándar de prueba se torna de mayor rigor para la representación social, aspecto que corresponderá al Juez de extinción de dominio determinar en cada caso.

123. La excepción mencionada tiene lugar, porque lo que carece de relevancia en el juicio de extinción de dominio es la decisión que el juzgador penal adopte sobre la probable responsabilidad penal del inculpado o su culpabilidad en sentencia definitiva, pues tal responsabilidad no constituye uno de los elementos necesarios para declarar extinto el dominio del propietario; sin embargo, lo que necesariamente trasciende es la no comprobación del hecho ilícito.

124. En ese tenor, es evidente que el Juez de extinción de dominio se encuentra facultado para requerir oficiosamente, antes de resolver en definitiva, al Juez ante quien se siga la causa penal, las constancias del juicio, a fin de estar en posibilidad de resolver de manera congruente con la de su homólogo penal, en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito que haya dado lugar al ejercicio de la acción de extinción de dominio, si acaso aquél ha dictado una resolución de naturaleza *intra procesal* en donde haya decretado la no acreditación del cuerpo del delito, o bien, la no demostración del delito, tratándose de sentencia definitiva.

125. Por lo anterior, debe concluirse que existe una vinculación entre uno y otro juicio en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito; de manera que, aun en el supuesto de que el juicio de extinción de dominio haya iniciado con aplicación de la excepción mencionada (es decir, sin una decisión a cargo del Juez de la causa penal), en caso de que durante el trámite del juicio de extinción de dominio, haya habido alguna consignación al Juez Penal a cargo del Ministerio Público por los hechos que dieron lugar a la extinción de

dominio y que, por ende, el Juez de ese proceso penal llegue a emitir alguna decisión sobre la no acreditación del hecho ilícito, deberá retomarse la regla general y entonces, su decisión impactará en la actuación del Juez de extinción de dominio si acaso éste hubiese resuelto que sí estaba probado ese aspecto.

126. Lo anterior es congruente en lo que al tema de la autonomía entre ambos procesos se refiere, pues tal separación deriva, precisamente, de la responsabilidad del sujeto activo, ya que la institución de la extinción de dominio se diseñó no para que el Estado aplique una sanción individualizada a un sujeto concreto por haber observado una conducta antijurídica prevista en la ley penal, sino para extinguir el dominio de los bienes que enseguida se describen:

a) Los que son instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal del sujeto a quien se le reprocha su comisión, **pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió**.

b) Los que, sin ser instrumento, objeto o producto del delito, hayan sido utilizados o destinados para ocultar o mezclar bienes producto del delito, **siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior**.

c) Los que se estén utilizando para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño conoce esa circunstancia y no la notifica a la autoridad, o hace algo para impedirlo.

d) Los intitulados a nombre de terceros, pero que existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

127. Entonces, ante la distinción apuntada relativa a que en el proceso penal se juzga si el sujeto a quien se le atribuye una determinada conducta o hecho catalogado como delito por la ley, es responsable de haberlo cometido, en tanto que, en el procedimiento de extinción de dominio se resuelve sobre la extinción de la propiedad de aquellos bienes que se han descrito, debe concluirse que en el juicio mencionado en último lugar es intrascendente que se demuestre –o no– la responsabilidad del sujeto activo.

128. Lo que se quiere explicar es que la base del procedimiento de extinción de dominio ciertamente se edifica en la existencia del hecho ilícito,

empero, su constatación es a título descriptivo y despersonalizado, esto es, la constatación del hecho ilícito en la extinción de dominio requiere la demostración de que ocurrió un evento histórico que se adecua a la descripción de alguno de los delitos previstos en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 22 constitucional y debiéndose dejar de lado el análisis a título personal de la conducta y culpabilidad como atributos de responsabilidad específica de quien lo haya cometido; en ese sentido, es factible dejar de analizar causas de justificación o excluyentes de delito a título personal, ya que para eso está el procedimiento penal.

129. Por eso, la acción de extinción de dominio procede aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal del sujeto a quien se le reprocha su comisión, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió –como lo señala el artículo 22, fracción II, inciso a), parte *in fine*, de la Constitución Federal–. De ahí la necesidad de que, por regla general, la acción de extinción de dominio esté sujeta a que el Juez de la causa penal haya emitido alguna decisión (en orden de aprehensión o comparecencia, auto de formal prisión o sujeción a proceso), en la que afirme que los hechos consignados por el Ministerio Público acrediten la materialidad de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional (secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el caso de la legislación del Distrito Federal), a fin de dar seguridad jurídica desde el inicio del juicio de extinción de dominio.

130. Una vez precisado lo que debe entenderse por "hecho ilícito" y cuáles son los alcances de la autonomía prescrita en el artículo 22 constitucional, y sobre la base de que corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, aportar los "elementos suficientes para determinar" la existencia del "hecho ilícito" –entendido como el hecho catalogado en la norma penal como delito de los descritos en el artículo 22 constitucional y, en el caso de la legislación del Distrito Federal secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo–, así como la vinculación de los bienes con el ilícito, es necesario conocer cómo debe operar ese imperativo cuando los bienes que fueron instrumento, objeto o producto del delito, o que han sido utilizados de alguna manera en la comisión de los delitos especificados en el párrafo anterior, son propiedad de un tercero y cuáles son los mecanismos adoptados por el legislador para respetar sus garantías.

131. En el juicio de extinción de dominio cobra especial relevancia el afectado de buena fe, ante el riesgo de que, por un mal entendimiento de

la norma, pueda ser privado de sus bienes sin haberse seguido en su contra un juicio en el que se le respeten plenamente las formalidades esenciales del procedimiento.

132. Si bien la doctrina ha sostenido que la acción de extinción de dominio es una acción real, debido a que persigue a los bienes y no a las personas. No debe pasarse por alto que los bienes no tienen derechos, y que a quien se priva de los bienes es a una persona, lo cual adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que el afectado sea de buena fe.

133. Precisamente porque existe la posibilidad de que el afectado o propietario de los bienes sea de buena fe, y que tanto del Texto Constitucional como de los procesos legislativos se desprende que la acción de extinción de dominio debe ejercitarse con absoluto respeto de las personas de buena fe, el artículo 22 constitucional debe interpretarse con apego a las garantías constitucionales del posible afectado de buena fe, y no privarlo de la posibilidad de defenderse, porque en dicho caso ni se cumpliría con la finalidad de la figura, ni con la intención del Constituyente Permanente, según se demostrará más adelante.

134. Debe tenerse como "*afectado de buena fe*" al propietario o quien tenga algún derecho real sobre los bienes que sea afectado por una sentencia de extinción de dominio, acredite la legítima procedencia del bien y respecto de quien no existan evidencias de que haya participado o haya tenido conocimiento de la actividad delictiva. Para dichos efectos, es "*afectado de buena fe o tercero afectado*", el propietario de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, con las características antes apuntadas, quien debe ser llamado al juicio, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento (emplazamiento, ofrecimiento de pruebas, formulación de alegatos y el dictado de una sentencia), para deducir sus derechos, los que se encuentran tutelados a partir del establecimiento y distribución de las cargas probatorias que operan en el juicio de extinción de dominio y que más adelante se explicarán.

(c) Principio de presunción de inocencia

135. No pasa inadvertido para esta Sala que la quejosa, además de apoyar sus argumentos relacionados con la carga de la prueba en el principio de "presunción de buena fe", también se refirió insistentemente a la aplicación del "principio de presunción de inocencia" al juicio de extinción de dominio; sin embargo, éste no es aplicable al mismo.

136. Para respaldar tal conclusión, se transcribe el contenido, en lo conducente, del artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 20. … B. De los derechos de toda persona imputada:

"I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa."

137. Dicho precepto alude al principio de presunción de inocencia, el cual puede significarse como el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente, en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad.[19]

138. El citado principio reposa en la necesidad de garantizarle al imputado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente; su finalidad es brindarle seguridad jurídica de que si no se demuestra su culpabilidad, no debe dictársele una sentencia condenatoria.

139. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, ya se ha pronunciado en el sentido de que el principio de presunción de inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva y ha establecido que el citado principio pertenece al ámbito del derecho penal, porque está vinculado con la "responsabilidad penal" del inculpado en la comisión del delito.

140. La Sala ha hecho extensiva la aplicación del mencionado principio al derecho administrativo sancionador sólo en cierta medida, pues ha determinado que "su traslado al ámbito administrativo sancionador debe realizarse con las modulaciones que sean necesarias para hacer compatible este derecho con el contexto institucional al que se pretende aplicar",[20] en tanto que

---

[19] **Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)**
"Artículo 8. Garantías judiciales
"… 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. …"
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
"**Artículo 14**
"… 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. …"

[20] Amparo en revisión 466/2011, resuelto en sesión de once de noviembre de dos mil once.

existen importantes diferencias entre un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador.

141. Ha sostenido, además, que el principio de presunción de inocencia es inherente al derecho penal, porque está encaminado a evitar que se sancione al probable responsable en su persona, hasta en tanto se acredite plenamente su culpabilidad.

142. Situación que también puede presentarse en el procedimiento administrativo sancionador, en cuanto a que también se pueden imponer sanciones –por ejemplo, destitución e inhabilitación del servidor público–.

143. Sin embargo, dicho principio no es aplicable al procedimiento de extinción de dominio, por la sencilla razón de que, en el tema de la responsabilidad penal del sujeto activo, es autónomo de la materia penal, cuenta habida que en aquél no se formula imputación al demandado por la comisión de un delito.

144. Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 23/2011, el veinticinco de enero de dos mil once, consideró que el principio de presunción de inocencia no es aplicable al juicio de extinción de dominio.

145. En efecto, si bien la acción de extinción de dominio tiene su origen en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, también lo es que su objeto –como se ha repetido con insistencia–, no es sancionar penalmente al responsable en la comisión de dichos antisociales, sino resolver sobre la vinculación existente entre un determinado bien relacionado con actividades de un tipo especial de crimen, con un hecho ilícito de las características anteriores, en todo caso, sin prejuzgar sobre la culpabilidad del autor o partícipe del mismo.

146. No obstante lo anterior, el hecho de que el principio de presunción de inocencia no se considere extensivo al juicio de extinción de dominio –al no tener por objeto juzgar penalmente a los responsables de la comisión de los delitos–, no significa soslayar el respeto a la dignidad humana del demandado y el trato procesal imparcial, traducido en la satisfacción de su garantía de defensa adecuada en relación con su patrimonio, ni puede traducirse en posicionar de *facto* al posible afectado en una condición tal que sea él a quien corresponda demostrar la improcedencia de la acción, pues para tal efecto se parte de la presunción de buena fe, a partir de la cual se activa la

dinámica del *onus probandi* y se distribuye la carga probatoria que corresponde a cada una de las partes.

147. Lo anterior, así fue reconocido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 23/2011,[21] en el cual se argumentó:

"Es así que conforme al transcrito artículo,[22] se impone al afectado la carga de probar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita, **lo que significa que corresponde al actor o Gobierno del Distrito Federal, a través del Ministerio Público, acreditar** tanto que se utilizó el bien para cometer delitos de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos, **como que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia**, lo que además implica que el afectado tiene la carga de desvirtuar las presunciones e indicios que deriven en su contra y aportar elementos de prueba idóneos para demostrar que tuvo una actuación de buena fe y que estaba impedido para conocer la utilización ilícita del bien materia de la extinción de dominio, lo cual, aunque tenga la apariencia de un hecho negativo, como elemento de la excepción del demandado es materia de prueba, porque es una negativa que deriva de hechos o elementos positivos, lo que supone que pesa sobre el afectado la carga de aportar elementos de prueba de los cuales deriven datos o inferencias de que conforme al sentido ordinario de las cosas, no tuvo la posibilidad física o jurídica de conocer la utilización ilícita del bien de su propiedad, mientras que al actor corresponde aportar, además, pruebas que desvirtúen la buena fe del dueño.

"Aunado a lo anterior, debe también destacarse que en la iniciativa presidencial de la reforma constitucional se señaló que la nueva norma de extinción de dominio debía establecer expresamente que no debe proceder la aplicación a favor del Estado de los bienes propiedad o poseídos por personas de buena fe, con el objeto de no incurrir en arbitrariedades, por lo que el procedimiento y resolución sólo tiene que realizarlo la autoridad judicial, lo que concatenado con el artículo 14, párrafo segundo, constitucional, debe implicar un procedimiento en donde se respete la garantía de audiencia."

---

[21] Resuelto en sesión de veinticinco de enero de dos mil doce, por mayoría de cuatro votos de los Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular.

[22] Artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.

148. De la transcripción antes hecha, se advierte que este Alto Tribunal determinó que el actor tiene la carga de acreditar no sólo la realización del hecho ilícito y el involucramiento de los bienes en la comisión de los delitos, sino también el conocimiento por parte del afectado, con el objeto de desvirtuar su buena fe; de manera que la carga probatoria para el afectado consistiría en aportar las pruebas idóneas para, a su vez, desvirtuar los elementos positivos aportados por la actora.

149. En consecuencia, en su carácter de órgano protector del orden constitucional, este Alto Tribunal estima que si al juicio de extinción de dominio no le son aplicables los principios del derecho penal, por considerarse de naturaleza distinta, no por ello está exento de que se respeten las garantías mínimas previas al acto de privación de su propiedad, como podrían ser las garantías de los procedimientos civiles, incluyendo a la *presunción de buena fe*, que es un principio general del derecho que está implícito en la Constitución Federal, a fin de no dejar en estado de indefensión al posible afectado, ya que sólo teniendo la oportunidad de *desvirtuar* los hechos concretos que se le imputen, podrá demostrar su buena fe.

150. Ciertamente, conforme a la interpretación realizada del artículo 22 de la Constitución Federal en la presente ejecutoria, para que *el juicio de extinción de dominio sea eficaz y no vulnere las garantías constitucionales* de los gobernados, debe cumplir con los requisitos siguientes:

A. En respeto a la garantía de seguridad jurídica, es aplicable *exclusivamente* a los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas;

B. En respeto a las garantías de audiencia y seguridad jurídica, en todo caso, la parte actora –el Estado, a través del Ministerio Público– debe aportar *suficientes elementos objetivos de prueba* para acreditar:

(a) Que sucedió *el hecho descrito en los tipos penales* de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, *contenidos en la legislación penal que sea aplicable* para juzgar la comisión de dichos delitos.[23]

(b) Que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos citados en el inciso anterior, o que han sido usados para ocultar o mezclar bienes producto del delito.

---

[23] Cabe destacar que la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal no prevé el delito de delincuencia organizada.

(c) Asimismo, en el caso de que la acción se ejerza por actualizarse el supuesto descrito en la última fracción, esto es, que los bienes están siendo usados por un tercero, el Ministerio Público debe aportar los datos que razonablemente permitan considerar que el dueño tuvo conocimiento de ello.

151. Lo anterior, con la finalidad de que la parte actora aporte datos o elementos positivos encaminados a demostrar la mala fe del afectado, y que de esa manera se le pueda permitir a éste defenderse, *desvirtuando* dichos elementos positivos exhibidos o aportados por la actora. Es momento, entonces, de examinar cómo opera la dinámica probatoria en el juicio de extinción de dominio y, específicamente, en el caso en que quien se ostenta tercero afectado de buena fe, comparte la copropiedad del bien, cuyo dominio se pretende extinguir, con uno de los indiciados (por la comisión de alguno de los ilícitos a que se refiere el artículo 22 constitucional).

(d) Cargas probatorias

152. La fracción II del artículo 22 constitucional[24] contiene cuatro incisos, a saber: el inciso **a)** regula la premisa general, esto es, establece que procede la acción de extinción de dominio respecto de bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto del delito; por su parte, el inciso **b)** se refiere a casos en los que los bienes son utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; el inciso **c)** corresponde al caso en que los bienes estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y, finalmente, el inciso **d)** regula el caso de los bienes que estando intitulados a nombre de terceros, existan elementos suficientes para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por esos delitos se comporte como dueño.

153. En lo así relacionado, se deduce que los elementos a demostrar son diferentes en cada caso, según la causa que origine la pretensión de extinción del dominio.

---

[24] "II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
"a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
"b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.
"c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
"d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño."

154. Así, cuando el bien es utilizado o es instrumento en la comisión del delito, no se le atribuye necesariamente una procedencia ilícita. A diferencia de dicha hipótesis, cuando se asevera que el bien es "producto del delito", ello sí implica que el bien es de procedencia ilícita, esto es, que se adquirió con recursos obtenidos con la comisión del hecho ilícito. Entonces, en aquellos casos en que el bien se considera "producto del delito", cobra mayor peso la prueba sobre la adquisición del bien con recursos de procedencia lícita, pues es así que puede el afectado desvirtuar la aseveración de la actora, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas que demuestren que el bien lo adquirió por una vía distinta a la comisión de un delito. En estos casos, el afectado tiene la carga de demostrar un hecho concreto positivo: la procedencia lícita del bien.

155. Sin embargo, cuando la acción de extinción de dominio no se ejerce sobre la base de que el bien es producto del delito, sino sobre la base de que es instrumento del delito o utilizado en la comisión de delitos, la situación cambia, puesto que en esos casos, la prueba de la procedencia lícita de los bienes, si bien no resulta inútil, sí pierde relevancia, ya que no se cuestiona la procedencia del bien, sino el uso que se le da.

156. Asimismo, la prueba de la procedencia lícita de los bienes también resulta trascendente **cuando existe una relación de confianza** entre una o varias de las personas que se consideran indiciadas en la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional y quien aduce ser un "tercero de buena fe", en cuyo caso debe descartarse la posible actualización de la hipótesis del inciso d), que señala:

"II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

"… d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño."

157. Este inciso regula el caso de los prestanombres o testaferros. Tal como se precisó al examinarse las causas que dieron lugar a la incorporación de la extinción de dominio a nuestro sistema jurídico, el Constituyente Permanente fue muy insistente en que el objetivo principal de la acción de extinción de dominio es privar a las bandas criminales de los bienes que utilizan para la comisión de los delitos, destacando que, por regla general, dichos bienes no están a nombre de los procesados, y aun cuando sea evidente que se utilizan

como instrumento para el delito o que son producto de operaciones delictivas, debido a esa falta de relación directa con los procesados, el Estado no puede allegarse de ellos.

158. Precisamente con la finalidad de allegarse de dichos bienes creó la acción de extinción de dominio, la cual no requiere de que los bienes que se utilizan para cometer los ilícitos estén a nombre de los procesados, sino que se acredite que son "producto", "instrumento" u "objeto" del delito.

159. Sin embargo, como se explicará con más detenimiento más adelante, para no dejar en indefensión a los propietarios del bien que no estén implicados en la comisión del ilícito, el inciso c) de la fracción II del artículo en comento impone al Ministerio Público que aporte indicios del conocimiento de éste respecto del uso indebido de su bien.

160. Por lo anterior, el mero hecho de que el bien esté intitulado a favor de un tercero, no implica, necesariamente, que ese tercero sea de buena fe, puesto que bien podría tratarse de un prestanombres; para descartar esa posibilidad, resulta relevante la prueba de la procedencia lícita del bien.

161. Ahora bien, la prueba de procedencia lícita se traduce en que el titular del bien aporte elementos de prueba que razonablemente conduzcan al juzgador a la convicción de que el bien tiene un origen lícito, como puede ser, enunciativa y no limitativamente, exhibir el instrumento público que demuestre que lo obtuvo por herencia, que lo adquirió por virtud de un préstamo bancario, o que a la fecha de adquisición del bien contaba con ingresos de procedencia lícita, suficientes para la adquisición del bien, ya sea mediante la exhibición de su declaración de impuestos, pagos provisionales de los mismos, constancias de retenciones de salarios o de pagos a las instituciones de seguridad social.

162. Al respecto, no debe soslayarse que la carga de que se trata encuentra mayor dificultad cuando ha pasado bastante tiempo desde la adquisición del bien, en cuyo caso no se tiene la obligación de conservar la documentación mencionada (por ejemplo, los contribuyentes se encuentran obligados a conservar su documentación fiscal solamente por el plazo de cinco años); de manera que en aquellos casos en que la adquisición del bien se haya realizado más de diez años atrás, atendiendo a que ése es el plazo mayor de prescripción que establece la ley, no sería razonable exigir que se almacene o archive toda la documentación y, por tanto, se demuestre en forma detallada y precisa el origen de cada peso con el cual se pagó el precio del bien; en tales casos, sí es posible aportar elementos de prueba o indicios que puedan razonablemente

conducir al juzgador a la convicción de que el bien tiene procedencia lícita, documentos, testimoniales o cualquiera otra siempre que no esté prohibida por la ley, en cuyo caso el juzgador debe atender a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, en relación con las circunstancias del caso, al llevar a cabo su valoración.

163. Lo anterior es importante para descartar la hipótesis del inciso d) multicitado; de manera que sólo aquel titular que acredite la procedencia lícita del bien, conforme al parámetro establecido, podrá ser considerado "tercero o afectado de buena fe", para los efectos del inciso c), fracción II, del artículo 22 constitucional.

164. Ahora bien, el inciso c) de la fracción II del precepto constitucional en análisis establece una regla específica aplicable al afectado de buena fe, como sigue:

"II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

"…

"c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos **por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello** y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo."

165. De dicho inciso se desprende que, cuando se trata de terceros afectados de buena fe, la carga de la prueba de la parte actora no se satisface acreditando solamente el hecho ilícito y el involucramiento de los bienes, sino que el Ministerio Público también debe aportar los datos que razonablemente permitan involucrar a su propietario o considerar, aun indiciariamente, que el propietario tenía conocimiento de los hechos. Esos requerimientos son indispensables para no dejar al tercero de buena fe en estado de indefensión, como se demostrará a continuación:

166. La fracción III del artículo 22 constitucional establece que el afectado, esto es, el propietario de los bienes objeto del juicio de extinción de dominio, sólo puede defenderse probando lo siguiente:

"III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes."

167. Por lo tanto, si en los términos de la fracción III del artículo 22 constitucional, el afectado, propietario de los bienes, sólo puede demostrar tres cuestiones: (1) la procedencia lícita de los bienes, (2) su actuación de buena fe y (3) que estaba impedido para conocer la utilización ilícita de sus bienes; en el caso que nos ocupa, esto es, cuando la acción se ejercita sobre la base del "uso" que se les da a los bienes, y alega haber dado el inmueble en arrendamiento a un tercero, en atención a que en el sistema jurídico mexicano opera la presunción de buena fe, para demostrar tanto el segundo como el tercero de esos elementos se presenta un inconveniente de orden lógico, pues: ¿cómo acredita el propietario de manera fehaciente que mantuvo su buena fe y, por lo tanto, que no tuvo conocimiento del uso ilícito que se le estaba dando al inmueble durante todo el lapso en que, se aduce, se utilizó para la comisión de delitos?

168. Tendría que probar plenamente que durante las 24 horas de cada día de dicho lapso actuó de buena fe, porque siempre se le podrá decir, la prueba presentada sólo acredita una actuación diligente en una fecha determinada, pero no en las demás.

169. El mismo razonamiento se aplica a la obligación de acreditar que el propietario "estaba impedido" para conocer de los hechos. ¿Cómo se acredita que durante un lapso una persona tuvo desconocimiento de un hecho y que no pudo conocerlo?

170. Esta Primera Sala estima que si se deja la carga absoluta de la prueba al afectado respecto de su buena fe y de que estaba impedido para conocer la ilícita utilización del bien, la "buena fe" deja de ser un deber moral de conducirse honradamente en la convivencia humana,[25] para convertirse en la exigencia de vigilar a los otros en todo momento y de documentar dicha vigilancia, para poder acreditar que a falta de indicios, no tenía la obligación de notificar nada.

171. Acreditar la "buena fe" a falta de indicios o elementos de prueba que demuestren la mala fe del afectado, se torna prácticamente imposible.

172. Por lo anterior, la interpretación correcta de la fracción II, inciso c), en relación con la fracción III del artículo 22 constitucional, necesariamente requiere de que la parte actora aporte datos que razonablemente permitan

---

[25] *Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México*, Editorial Porrúa, México, 1995, p. 362.

considerar la mala fe del afectado, o indicios de que tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de los hechos delictivos, ya que sólo dándole al afectado la posibilidad de desvirtuar dichos datos o elementos puede "demostrar" su actuación de buena fe, en los términos señalados por la fracción citada.

173. Lo anterior confirma el principio general del derecho que señala que la "buena fe" se presume. Lo cual es acorde al principio ontológico de la prueba, puesto que lo ordinario, que viene a ser la buena fe, se presume, y lo extraordinario, que es la mala fe, se prueba.

174. La buena fe se traduce en "ausencia de mala fe", "ausencia de dolo". El "estar impedido" para conocer un mal uso de un bien, se traduce también en hechos negativos: "no poder" conocer, en "un desconocimiento", otro hecho negativo.

175. Es un principio del derecho que los hechos negativos no se prueban. Conforme al principio lógico de la prueba, los hechos positivos se prueban porque es más fácil demostrarlos, se pueden demostrar con pruebas directas e indirectas. Por el contrario, los hechos negativos pueden ser de naturaleza formal o sustancial. Los hechos negativos formales tienen como contenido un aserto positivo y sólo tienen de negativo la forma en que se exponen.

176. Los hechos negativos formales se regulan en el artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:

"**Artículo 282.** El que niega sólo será obligado a probar:

"I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;

"II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;

"III. Cuando se desconozca la capacidad;

"IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción."

177. Sólo dichos hechos negativos pueden ser objeto de prueba. Los hechos negativos sustanciales no pueden ser objeto de prueba, porque son verdaderas negaciones que no se resuelven en asertos positivos.

178. Pues bien, la "ausencia de mala fe o de dolo" o el "desconocimiento" de ciertos hechos, en forma general, sin la existencia de indicios o datos en

contrario, son hechos negativos sustanciales, cuya prueba se torna prácticamente imposible.

179. Por ello, la interpretación del artículo 22 de la Constitución Federal debe hacerse de forma sistemática, atendiendo a todas sus fracciones e incisos en conjunto, y no en forma aislada.

180. Ya que sólo de esa manera se destruye la presunción de buena fe que tiene el afectado, y éste puede aportar, a su vez, elementos de prueba para desvirtuar la mala fe que se le atribuye.

181. En ese tenor, la norma no debe interpretarse en el sentido de que la carga probatoria corresponde en su totalidad al afectado, pues una interpretación con esos alcances llevaría a sostener que la acción de extinción de dominio impone una presunción *iure et de iure* de culpabilidad en el propietario de los bienes, la cual sólo puede ser desvirtuada, por ejemplo, habiendo sido declarado en estado de interdicción.

182. Eso no es lo que dice el Texto Constitucional, no lleva a un equilibrio entre la acción de extinción de dominio y las garantías constitucionales, ni puede ser una interpretación razonable del artículo 22 en análisis.

183. El Texto Constitucional contempla expresamente el derecho de defensa del afectado y, para que dicha defensa pueda tener lugar, las fracciones II y III del artículo 22 constitucional deben interpretarse conjuntamente, para concluir que el ejercicio de la acción de extinción de dominio **impone a la parte actora la obligación de aportar al juicio elementos suficientes para acreditar:**

(1) Que sucedió el hecho que se adecua a la descripción legal de los delitos de *delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas*, contenidos en la legislación penal que sea aplicable para juzgar el delito que corresponda; y,

(2) Que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos enumerados en el inciso anterior.

(3) Asimismo, en el caso de que la acción de extinción se ejerza por actualizarse el supuesto descrito en la última fracción, esto es, que los bienes están siendo usados por un tercero, que el dueño tuvo conocimiento de lo anterior, el Ministerio Público deberá aportar los datos que razonablemente prueben dicho conocimiento.

184. De manera que la acción de extinción de dominio resultará procedente si el actor aporta datos e indicios en los términos apuntados, para acreditar dichas cuestiones, y el afectado no logra desvirtuarlas para demostrar o restablecer su buena fe.

185. La interpretación que antecede logra el punto de equilibrio entre la acción de extinción de dominio y el respeto de las garantías constitucionales de los gobernados, en particular, de los afectados de buena fe, ya que obliga a la autoridad a aportar los datos que razonablemente permitan considerar que el afectado tenía conocimiento de esa situación, es decir, elementos encaminados a demostrar la mala fe del afectado, lo cual se traduce en hechos concretos que éste puede tratar de desvirtuar.

186. Se traduce en una carga de la prueba dinámica, que no queda en forma absoluta en una sola de las partes, y que se compone de hechos concretos, susceptibles de acreditarse y de desvirtuarse, y no en hechos negativos sustanciales que se vuelven de imposible acreditación.

187. Una interpretación contraria, además de conculcar el orden constitucional y validar la actuación arbitraria por parte de la autoridad, no llevaría al cumplimiento de la finalidad que persigue la figura de extinción de dominio: combatir a la delincuencia organizada.

188. No debe pasarse por alto que el objetivo de la acción de extinción de dominio radica en tener una herramienta *eficaz de combate al crimen organizado*, encaminada a privar a la delincuencia organizada de su patrimonio, para debilitarlo en su estructura económica, que es lo que lo fortalece y le permite acceder a medios cada vez más sofisticados para delinquir. Pues bien, si se priva de un bien a una persona que no es parte de la delincuencia organizada ni está involucrada con la misma, no se va a debilitar a la delincuencia organizada, ni a su patrimonio.

189. Ahora, a falta de pruebas directas, la mala fe debe acreditarse adminiculando diversos indicios que conduzcan al juzgador a la convicción de que el afectado conocía y permitía la comisión de los delitos con sus bienes.

190. Hay toda una diversidad de pruebas que se pueden aportar para demostrar que el afectado estaba involucrado en la delincuencia organizada, que se conducía como testaferro, o que estaba vinculado de una u otra manera. Lo que no es válido es omitir la investigación correspondiente y pasar la carga absoluta de la prueba al afectado.

191. Asimismo, el artículo 14 de la Constitución Federal recoge expresamente la aplicación de los principios generales del derecho a los juicios del orden civil,[26] entre los cuales se encuentra la presunción de buena fe. La regla general es que la "buena fe" se presume, según se desprende de los artículos 257 y 807 del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal que, literalmente, disponen:

"Artículo 257. La buena fe se presume; para destruir esta presunción se requiere prueba plena.

"Artículo 807. La buena fe se presume siempre; al que afirme la mala fe del poseedor le corresponde probarla."

192. Al respecto, cabe hacer referencia al contenido de la conferencia impartida el veinticuatro de marzo de dos mil nueve por el doctor **********, embajador de Colombia en México, a miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,[27] quien, en lo que interesa, expuso lo siguiente:

"Se debe tener la convicción por parte del fiscal de conocimiento antes de iniciar el proceso, de que se cuenta con prueba suficiente para arribar a una sentencia de extinción de dominio; por ello no se otorga tiempo limitado como sucedía en la anterior legislación para esa etapa preprocesal; se debe llegar entonces al inicio del proceso con suficientes elementos; de manera que el periodo probatorio dentro del proceso, lo será en esencia para las partes procesales, sin que obviamente ello sea óbice para que la fiscalía actúen (sic) en lo que considere pertinente.

"… Tratándose de terceros, se verificará si probatoriamente se ha logrado desvirtuar la presunción de buena fe y consiguientemente, estamos ante culpa grave o dolosa; si se logró probatoriamente quebrantar aquélla, la resolución de procedencia deviene procesalmente.

"… Todo ello conduce a la necesidad de recurrir a objetividades, que en últimas permitirán elaborar los indicios que en términos generales, conducirán a sostener las aseveraciones procesales que de ella se deriven.

---

[26] "**Artículo 14.** … En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

[27] "*Extinción del derecho de dominio. Conferencia del Embajador de Colombia*". En la Revista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, año II, No. 4, diciembre 2009, pp. 101-148.

"… Los medios de prueba que se utilizan para arribar a la certidumbre probatoria que requiere la declaración de extinción de dominio, generalmente tiene el carácter de indiciaria, a menos que (y serán pocos los casos), se tenga la prueba directa (confesión por ejemplo); de todas formas la certeza probatoria debe estar presente, aunque no en igual medida por lo que se ha indicado, frente a una sentencia de carácter penal.

"… **Ejemplos de la prueba indiciaria, el caso del habitus: conducta antecedente, haber estado involucrado en fraudes, simulaciones, actividades ilícitas, ser recurrente en este tipo de acciones; falta de medios económicos o cambio súbito de su situación: el salario no le alcanzaría para determinada compra; carecer de otra actividad que le permita incremento patrimonial; préstamos con circunstancias que escapan a la normalidad: sin fecha cierta, sin garantías, sin intereses, prácticamente una donación**; incuria en la atención del proceso: normalmente una persona que tiene ingresos lícitos, carece de dificultad para mostrar el origen de los recursos que posee; tampoco obstaculiza la prueba, ni se le dificulta su obtención. Pero cada caso suministrará los indicios que le son propios; conducta adaptativa: frente a una determinada situación, el sujeto se acomoda a las nuevas circunstancias, a fin de ocultar su situación marginal, en cuanto al origen de los recursos.

"… **La carga de la prueba**

"El concepto de la carga de la prueba, es el que se debe manejar en este procedimiento y no el principio de presunción de inocencia; ello deviene como lógico y coherente, de acuerdo a la ideología en que se inscribe la acción de extinción de dominio; en efecto, en tratándose de una acción real con toda su carga semántico jurídica, los principios que orientan dicha acción son más del proceso civil, que no penal como equivocadamente se ha pretendido.

"… No se invierte, pues, la carga de la prueba, ni se pretende ello, debido a los parámetros legales del sistema jurídico; sólo a partir de unas probanzas, aportadas por demandantes, en otros por los fiscales instituidos para el caso, una aseveración a partir de prueba indiciaria o sumaria, que objetivamente muestre unos hechos, los cuales conforme a las causales contempladas en el artículo 2o. de la Ley 793 de 2002, resultan con vocación para la extinción del derecho de dominio.

"Se presentan probanzas que permiten colegir al funcionario correspondiente y así se le hace saber a quienes de alguna manera puedan resultar afectados con las decisiones sobre extinción de dominio, que se cuenta con

el caudal probatorio a partir del cual se hacen unas afirmaciones, frente a las de quienes se consideren afectados, habrán de proponer los medios exceptivos del caso, a fin de contradecir lo aseverado; entonces, como puede advertirse, no existe inversión de la carga de la prueba porque ello no es necesario, ya que al contar con medios de convicción, que generalmente serán los indiciarios por la naturaleza y circunstancias de los soportes de acción, con base en ellos, se procede.

"… **Los terceros; en especial el concepto de buena fe.**

"Las normas legales, y de manera enfática tanto la Ley 333 de 1996 en su artículo 12, como el decreto legislativo 1975 de 2002 y la Ley 793 de la misma anualidad, vigente, señalan **la necesidad de garantizar los derechos de los terceros, con el agregado de que sean de buena fe; en la última norma se agrega además**, que ésta sea exenta de culpa; por ello es que los conceptos deben ser tratados en forma conjunta para su cabal entendimiento, constituyendo el último complemento necesario del primero, tal como está concebido.

"… El tercero, es la persona titular de derechos reales principales o accesorios que eventualmente vale decir, circunstancialmente pueden verse involucrados a través de sus bienes o derechos en trámite de extinción de dominio; es la persona que en principio no tiene relación con la situación; pero que de alguna forma puede resultar a priori afectada.

"La buena fe, se presume constitucionalmente (art. 83 C.P.), así como en el ordenamiento civil (artículo 769 del Código Civil); por igual, las normas ya mencionadas; no obstante así no hubiese sido mencionado siquiera en éstas, es claro que sus derechos quedan a salvo. Sólo cuando se establezca por los medios probatorios indicados en la ley, el proceder con dolo o culpa grave pueden involucrar sus derechos en la determinación definitiva respecto a la extinción de dominio."

193. En atención a todo lo anterior, para generar la congruencia en el sistema y activar la dinámica de las cargas probatorias a partir de hechos objetivos y no de una presunción de mala fe, se advierte necesario que el Estado aporte datos que vinculen al propietario de los bienes objeto del proceso de extinción de dominio, o que permitan afirmar, aun indiciariamente, que tenía conocimiento de que sus bienes estaban siendo utilizados en la comisión de los delitos, lo cual es necesario para destruir el principio general del derecho de presunción de buena fe.

194. En esa misma línea, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, también conocida como "Convención de Palermo", a la cual se le atribuye la regulación de la acción de extinción de dominio, prevé expresamente que las disposiciones que autorizan al Estado el decomiso o incautación de bienes de procedencia ilícita o utilizados en la comisión de delitos por parte de la delincuencia organizada, no deben interpretarse en perjuicio de los terceros de buena fe.[28]

195. De conformidad con lo anterior, le asiste la razón a la quejosa, al sostener que fue indebida la decisión de imponerle, de manera irrestricta, la carga de la prueba para demostrar que se encontraba impedida para conocer de la utilización ilícita de su propiedad, sin considerar si, previamente, el Ministerio Público había aportado algún dato que razonablemente permitiera considerar ese conocimiento, lo que, incluso, se advierte del contenido de los artículos 4, 5 y 50 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.

---

[28] "*Artículo 12. Decomiso e incautación*
"1. Los Estados parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:
"a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;
"b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente convención.
"2. Los Estados parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.
"3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.
"4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado.
"5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.
"6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente convención, cada Estado parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
"7. Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.
"8. **Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe**."

III. Interpretación de los artículos 4, 5 y 50 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, a la luz del artículo 22 constitucional.

196. Los artículos citados disponen lo siguiente:

"**Artículo 4.** La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes mencionados en el artículo 5 de esta ley, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita.

"La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido.

"La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe.

"La extinción de dominio no procederá sobre bienes decomisados por la autoridad judicial, en sentencia ejecutoriada.

"Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Distrito Federal y serán destinados al bienestar social, mediante acuerdo del jefe de Gobierno que se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Cuando se trate de bienes fungibles se destinarán en porcentajes iguales a la procuración de justicia y la seguridad pública.

"Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se considerará como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. La Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, entregarán un informe anual a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sobre los bienes materia de este ordenamiento."

"**Artículo 5.** Se determinará procedente la extinción de dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes:

"I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;

"II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior;

"III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo;

"IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

"El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando el agente del Ministerio Público cuando el agente del Ministerio Público (sic) acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia."

"**Artículo 50.** El Juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia del procedimiento cuando:

"I. Se haya acreditado la existencia del hecho ilícito, por el que el agente del Ministerio Público ejercitó la acción, de los señalados en el artículo 4 de esta ley;

"II. Se haya probado que son de los señalados en el artículo 5 de la ley; y

"III. El afectado no haya probado la procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita.

"En caso contrario, ordenará la devolución de los bienes respecto de los cuales el afectado hubiere probado la procedencia legítima de dichos bienes y los derechos que sobre ellos detente.

"La sentencia que determine la extinción de dominio también surte efectos para los acreedores prendarios o hipotecarios, o de cualquier otro tipo

de garantía prevista en la ley, de los bienes materia del procedimiento, en atención a la ilicitud de su adquisición. Con excepción de las garantías constituidas ante una institución del sistema financiero legalmente reconocida y de acuerdo con la legislación vigente.

"La sentencia también resolverá, entre otras determinaciones, lo relativo a los derechos preferentes, únicamente los alimenticios y laborales de los terceros, así como la reparación del daño para las víctimas u ofendidos, que hayan comparecido en el procedimiento.

"Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, y en los supuestos de los dos párrafos anteriores, el Juez fijará su importe en cantidad líquida o por valor equivalente en especie, y se ordenará el remate de los bienes para su cumplimiento, pero se permitirá que el Gobierno del Distrito Federal pueda optar por pagar a los terceros, víctimas u ofendidos para conservar la propiedad de los bienes."

197. De la *interpretación sistemática* de los artículos de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, de su *interpretación teleológica* derivada de la intención manifestada por el legislador en los procesos legislativos y de su *interpretación conforme* con la Constitución Federal, se puede concluir que los artículos impugnados imponen, en la parte actora, la carga de probar en primer orden, al menos con datos que razonablemente permitan aseverar la vinculación del propietario con el ilícito o que tenía conocimiento de que éste se llevaba a cabo, para desvirtuar la buena fe a favor del afectado, y que dan la oportunidad a éste de, a su vez, desvirtuar dichos elementos de prueba, para restablecer su buena fe, así como que estaba impedido para conocer de los hechos y la procedencia lícita de los bienes.

198. En efecto, la ley en comentario tuvo su origen en tres diversas iniciativas presentadas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

199. En lo que interesa, del dictamen fechado el veinticinco de noviembre de dos mil ocho, presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Administración, y Procuración de Justicia, a las iniciativas correspondientes, se desprende lo siguiente:

"Séptimo. De esta forma se han incorporado en cada uno de los capítulos, aquellos imperativos estructuralmente necesarios para conformar, en los términos del mandato constitucional, un procedimiento eminentemente contra-

dictorio, jurisdiccional y autónomo de la materia penal, procurando en todo momento el respeto a las garantías de audiencia y debido proceso legal. ...

"Octavo. … En este sentido se introducen conceptos como el de evento típico y hecho ilícito, con los cuales se generan los elementos mínimos de identificación que deberá tomar en cuenta el juzgador al momento de emitir el auto admisorio del procedimiento y la consiguiente sentencia. Así como serán las figuras jurídicas que permitirán establecer los estándares de seguridad para los gobernados que se consideren partes en el procedimiento que se propone.

"… Noveno. En el capítulo II se consideró necesario delimitar el marco conceptual de la acción, señalándose que por sus características será de carácter real y de contenido patrimonial, debiendo proceder sobre cualquier derecho real, principal o accesorio. En estos términos se determinó aquellos casos en los que sería procedente dicha acción, considerando para ello eventos típicos delimitados por los hechos ilícitos en los casos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. …

"… Dejando en claro que para ejercitar la acción de extinción de dominio deberá integrar el evento típico, integrado por los siguientes elementos: a) hecho, lo que implica que no es necesario acreditar la existencia de una conducta específica, y b) típico, con los elementos que integran la descripción del hecho de delincuencia organizada, trata de personas, secuestro y robo de vehículo, según la norma donde se prevé, es decir Código Penal para el Distrito Federal y Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal. Y, de forma indiciaria, que los bienes son de los señalados en el artículo 5 de la ley que se dictamina.

"… Décimo octavo. Estas comisiones que dictaminan las iniciativas presentadas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, el diputado ********** y el diputado **********, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, consideran que en el capítulo correspondiente de las pruebas, por la naturaleza de la acción, deberán admitirse todas las que señale el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y que tratándose de la prueba pericial, si hubiere discrepancia entre los dictámenes, se nombrará perito tercero preferentemente de los que disponga el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Así como que la testimonial y confesional se desahogará con la presencia ineludible del Juez."

200. Asimismo, del proceso de discusión debe resaltarse lo siguiente:

"La C. Diputada **********. Se crea una figura de excepción como lo mandata la Constitución que se aplicará a los grupos de delincuencia organizada y personas que hacen del delito su forma de vida, pero que debe respetar las garantías individuales de las personas de buena fe y modo honesto de vivir, que no se dediquen a esas actividades.

"Precisamente por ello es que me permito proponer una modificación al artículo 5 del decreto en comento y a debate y en este caso estamos proponiendo con base en los siguientes argumentos:

"El artículo 5, fracción III de la ley que se expide expresamente señala que se determinará procedente la extinción de dominio previa declaración jurisdiccional respecto de aquellos bienes que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; supuesto normativo que requiere precisar, y ésa es la propuesta que se formula, que únicamente se podrá aplicar cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, en protección a los habitantes del Distrito Federal.

"Con esta precisión se lograría el respeto a las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en nuestra Carta Magna y que obligan a las autoridades a crear normas claras y precisas, así como aplicarlas únicamente cuando se actualice con exactitud el supuesto de hecho previsto en la ley, se evitarían actos de corrupción policial, ministerial e inclusive de la autoridad judicial y como consecuencia injusticia y zozobra, porque se requeriría probar la figura de delincuencia organizada conceptualizada por la propia Constitución como una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia, para que se pudiera ordenar la extinción de dominio.

"Es decir, con esta propuesta, un gobernado no deberá y se encontrará protegido para enfrentar un procedimiento de extinción de dominio por un solo vehículo que compre y sin saberlo se encuentre remarcado, o cuando se estacione en su cajón de estacionamiento un vehículo con reporte de robo o cuando en algún departamento que rente se cometa alguno de los delitos ya señalados, sino única y exclusivamente cuando la autoridad acredite que se trata de delincuencia organizada y que conocía dicha circunstancia, de esta forma se otorgará protección a los gobernados, porque se arroja la carga de la prueba a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el delito fue cometido por un grupo de delincuencia organizada y además que tenía conocimiento de ese hecho y en caso contrario no se les deberá molestar con un procedimiento de extinción de dominio.

"Por tal motivo, comparezco ante el Pleno de esta soberanía para proponer la adición de un último párrafo al artículo 5 que sea del tenor siguiente: El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando el agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer el delito de delincuencia organizada y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia.

"Agradezco su atención y espero que respaldemos todos estas propuestas que vienen a mejorar el marco de garantías constitucionales para los propietarios.

"El C. Presidente.—Gracias, diputada. Está a discusión la propuesta de modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra?

"Proceda la secretaría en votación económica a preguntar a la asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación presentada.

"El C. Secretario.—Por instrucciones de la presidencia, se pregunta al Pleno en votación económica si es aprobarse la propuesta de modificación.

"Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

"Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.

"Aprobada la propuesta, diputado presidente.

"… El C. Diputado **********. La carga de la prueba debe ser del Ministerio Público, es un principio fundamental de derecho, la carga de la prueba la tiene quien acusa. Es decir, éste debe demostrar que la persona comete las omisiones de informar a la autoridad de notificar que en un bien de su propiedad se comete un ilícito penal y también demostrar que tuvo conocimiento de esos actos ilícitos en el bien de su propiedad, ya que como está redactado, esta fracción, la presunción de culpa está preestablecida en el propietario, ya que éste tiene que demostrar su inocencia dentro del proceso, antes de ser inclusive procesado.

"… El artículo 9, es necesario salvaguardar los derechos de personas ajenas al proceso que se pueden ver involucradas en este juicio de extinción porque los bienes estén entremezclados, y esto se presenta muy claramente en el régimen condominal en el que existe una copropiedad sobre el bien en su totalidad, debiendo el Juez respetar estos derechos de propiedad en su declaratoria por valor estimado y de productos entremezclados.

"La propuesta que hacemos a la fracción III es para que quede como sigue: 'Cuando se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente, éstos podrán ser objeto de la declaratoria de extinción de dominio hasta el valor estimado del producto entremezclado', y agregarle: 'respetando el derecho de propiedad en personas ajenas al proceso'. Ésa sería la propuesta en relación al artículo número 9, que si no tiene inconveniente el presidente.

"… La propuesta es quitar en esa fracción I del artículo 25 y la fracción II del 41 la palabra 'buena fe' para quedar en el caso del 25: La procedencia lícita de dichos bienes, así como que estaba impedido para conocer su utilización lícita, pensando que la buena fe tiene otra connotación y como argumento, por si ya tomaron la decisión de no hacerlo, voy a dar lectura a lo que dice el directorio de derecho privado Caso y Cervera, del diccionario privado Caso y Cervera:

"Define la buena fe como la creencia en que se halla una persona de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo. Significa rectitud, honradez. La buena fe significa confianza en que fía que el otro no lo engaña.

"Por lo tanto actúa a favor del afectado y no como pretende la Ley de Extinción de Dominio en su contra, o sea, la buena fe es la convicción, creencia que una persona tiene respecto de ser el titular del derecho o el propio porque su conducta está ajustada a la ley.

"El artículo 807 del Código Civil previene que la buena fe se presume siempre por consiguiente al que afirma la mala fe le corresponde probarlo. Por lo tanto, es el Ministerio Público al que le corresponde probar la mala fe del afectado, que él demuestre que actuó con buena fe, cuando es el Ministerio Público el que tiene que demostrarlo y al Juez, al pronunciar la sentencia, con las pruebas aportadas determinar si el afectado actuó con buena fe. Por lo tanto, se debe suprimir el concepto buena fe de los artículos 25 y 41 del proyecto de iniciativa de ley en comento.

"… El C. Diputado **********.—Con su venia, diputado presidente.

"Diputado **********: En general creo que tiene usted la razón jurídicamente hablando, pero es un asunto de acatamiento también de una norma superior, en este caso la reciente reforma al artículo 22 constitucional en su fracción III.

"Yo entiendo que como abogado es muy complicado acreditar la buena fe y es la discusión que tenemos con los compañeros de la fracción. No hay medio probatorio ni siquiera las testimoniales tienen ese valor jurídico para

comprobar la buena fe que es un asunto intrínseco, que es un asunto que hasta el día de hoy no puede estar definido, excepto en la teoría.

"Sin embargo nosotros le proponemos lo siguiente a todo el Pleno, dado que el artículo 22 constitucional en la reforma, fracción III, establece que toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe.

"Es decir, esto deviene desde el Texto Constitucional, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

"Si nosotros modificamos o reformamos este artículo 25 y suprimimos la palabra 'de buena fe', corremos el riesgo de modificar todo el cuerpo de la ley porque la palabra 'de buena fe' se sitúa incluso en el artículo 4 y otros más del cuerpo de la ley.

"Entonces la propuesta, con todo respeto, compañero diputado ********** y todo el Pleno de la Asamblea Legislativa, es que una vez que se modifique o se reforme de nueva cuenta porque tendrá que hacerse, incluso ya lo está tratando el Senado de la República en el estudio de este asunto y sobre todo en el término de 'buena fe'.

"En el momento que sea modificado constitucionalmente, evidentemente tendremos que modificarlo nosotros dada la complejidad de su comprobación, diputado **********. Ésa sería la propuesta, porque de otro modo tendríamos que estar modificando todo el cuerpo toral de la Ley de Extinción de Dominio que el día de hoy se está discutiendo."

De la transcripción anterior, se desprende, en forma clara, que los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal manifestaron expresamente que la carga de la prueba, respecto de la mala fe del afectado es para el Ministerio Público, ya que pasar la carga absoluta de la prueba respecto de su buena fe al afectado resulta en una carga de la prueba casi imposible. Cuestión que fue agregada en forma expresa en el artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, el cual fue aprobado en los términos siguientes:

"Artículo 5. Se determinará procedente la extinción de dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes:

"I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;

"II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior;

"III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo;

"IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

"El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando el agente del Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer el delito de delincuencia organizada y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia."

201. Ahora bien, con fecha diecinueve de julio de dos mil diez, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal una reforma al artículo citado para precisar que el supuesto de la fracción III podría también ser aplicable a la comisión de delitos patrimoniales, secuestro, trata de personas o robo de vehículos. Sin embargo, en el "Dictamen relativo a la iniciativa de reformas a la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, Código Penal para el Distrito Federal y Ley contra la Delincuencia Organizada para el Distrito Federal" se volvió a insistir en que *la carga de la prueba es para la parte actora, quien tiene que acreditar que los particulares, no dedicados a la actividad ilícita tuvieron conocimiento de los ilícitos y no lo notificaron a la autoridad o hicieron algo para impedirlo*, por lo que el artículo 5, que continúa vigente, se lee de la siguiente manera:

"Artículo 5. Se determinará procedente la extinción de dominio, previa declaración jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes:

"I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió;

"II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior;

"III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo;

"IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

N. de E. en relación con la entrada en vigor del presente párrafo, véase transitorio primero del decreto que modifica la ley.

(Reformado, G.O. 19 de julio de 2010)

"El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando el agente del Ministerio Público cuando el agente del Ministerio Público (sic) acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia."

202. De conformidad con lo anterior, los artículos citados con antelación deben interpretarse conjuntamente con el artículo 5 de referencia, para concluir que la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal no impone una carga de la prueba imposible a la afectada, dado que le pasa la carga de la prueba de la mala fe al Ministerio Público, quien puede aportar datos o elementos que razonablemente permitan considerar que, en el caso de que el bien esté siendo utilizado por un tercero, el propietario tuvo conocimiento de la comisión del ilícito, lo que permite que la afectada pueda desvirtuar los hechos concretos que se le imputan.

203. Lo expuesto es conforme con la interpretación correcta del artículo 22 de la Constitución Federal y con la intención, tanto del Constituyente Permanente, como de los diputados locales, de respetar las garantías constitucionales de los afectados en el juicio de extinción de dominio.

204. En consecuencia, se **concede el amparo y protección de la Justicia Federal** a la quejosa para que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado y emita otra en la que aplique la interpretación realizada en esta ejecutoria, tanto del artículo 22 de la Constitución Federal, como de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal; de manera que la acción de extinción de dominio sólo se considere procedente si la parte actora aportó elementos de prueba suficientes para acreditar (a) todos los elementos de la acción de extinción de dominio,

(b) que el inmueble materia del juicio natural fue instrumento del delito y (c) al menos, datos que razonablemente permitan considerar que la peticionaria de garantías tenía conocimiento de que su inmueble estaba siendo utilizado para ocultar un vehículo robado y, una vez hecho lo anterior, resuelva lo que estime pertinente.

205. En atención a que se determinó esencialmente fundado el concepto de violación analizado, es innecesario el estudio de los restantes, en atención a que la autoridad responsable habrá de llevar a cabo una nueva valoración de las pruebas, a partir de la interpretación que aquí se ha dado de las normas aplicables a los juicios de extinción de dominio en el Distrito Federal.

206. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

RESUELVE:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** para los efectos precisados en el último apartado de esta resolución, contra la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil once, pronunciada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación 1135/2010/01.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo y presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). La referencia al hecho ilícito, contenida en el artículo 2, fracción VIII, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, está asignada a un hecho que encuadra en alguno de los tipos penales que establece el artículo 22, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (típico), y que es contrario a derecho (antijurídico). En ese sentido, el concepto de cuerpo del delito, utilizado en el sistema procesal penal tradicional mixto, ahora es denominado hecho ilícito, para referirse a la acción u omisión considerada como delito por la ley penal, en el entendido de que su constatación es a título descriptivo y despersonalizado, esto es, la comprobación del hecho ilícito en la extinción de dominio requiere la demostración de que ocurrió un evento histórico que se adecua a la descripción de alguno de los delitos previstos en el artículo 4 de la ley citada, de conformidad con el artículo 22 constitucional, debiéndose dejar de lado el análisis a título personal de la conducta y culpabilidad como atributos de responsabilidad específica de quien lo haya cometido. En ese sentido, es factible dejar de analizar causas de justificación o excluyentes de delito a título personal, ya que para eso está el procedimiento penal. Por ello, la acción de extinción de dominio procede aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal del sujeto a quien se le reprocha su comisión, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

1a./J. 20/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga

Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz , Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 20/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO. El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos alude al principio de presunción de inocencia, que se define como el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad y que, por su naturaleza, es propio del derecho sancionador. En efecto, el citado principio reposa en la necesidad de garantizarle al imputado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente; su finalidad es brindarle seguridad jurídica de que si no se demuestra su culpabilidad, no debe dictársele una sentencia condenatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, ya se ha pronunciado en el sentido de que el principio de presunción de inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva y ha establecido que el citado principio pertenece al ámbito del derecho penal, porque está vinculado con la "responsabilidad penal" del inculpado en la comisión del delito. La Sala ha hecho extensiva la aplicación del mencionado principio al derecho administrativo sancionador sólo en cierta medida, pues ha determinado que "su traslado al ámbito administrativo sancionador debe realizarse con las modulaciones que sean

necesarias para hacer compatible este derecho con el contexto institucional al que se pretende aplicar", en tanto que existen importantes diferencias entre un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador. Ha sostenido además, que el principio de presunción de inocencia es inherente al derecho penal, porque está encaminado a evitar que se sancione al probable responsable en su persona hasta en tanto se acredite plenamente su culpabilidad. Situación que también puede presentarse en el procedimiento administrativo sancionador, en cuanto a que también se pueden imponer sanciones –por ejemplo destitución e inhabilitación del servidor público–. Sin embargo, dicho principio no es aplicable al procedimiento de extinción de dominio, por la sencilla razón de que, en el tema de la responsabilidad penal del sujeto activo, es autónomo de la materia penal, cuenta habida que en aquél no se formula imputación al demandado por la comisión de un delito. Esto es, si bien la acción de extinción de dominio tiene su origen en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, también lo es que su objeto –como se ha repetido con insistencia–, no es sancionar penalmente al responsable en la comisión de dichos antisociales, sino resolver sobre la vinculación existente entre un determinado bien relacionado con actividades de un tipo especial de crimen, con un hecho ilícito de las características anteriores, en todo caso, sin prejuzgar sobre la culpabilidad del autor o partícipe del mismo. No obstante lo anterior, el hecho de que el principio de presunción de inocencia no se considere extensivo al juicio de extinción de dominio –al no tener por objeto juzgar penalmente a los responsables de la comisión de los delitos–, no significa soslayar el respeto a la dignidad humana del demandado y el trato procesal imparcial, traducido en la satisfacción de su garantía de defensa adecuada en relación con su patrimonio, ni puede traducirse en posicionar *de facto* al posible afectado en una condición tal que sea él a quien corresponda demostrar la improcedencia de la acción, pues para tal efecto se parte de la presunción de buena fe a partir de la cual se activa la dinámica del *onus probandi* y se distribuye la carga probatoria que corresponde a cada una de las partes. En consecuencia, en su carácter de órgano protector del orden constitucional, este alto tribunal estima que si al juicio de extinción de dominio no le son aplicables los principios del derecho penal por considerarse de naturaleza distinta, no por ello está exento de que se respeten las garantías mínimas previas al acto de privación de su propiedad, como podrían ser las garantías de los procedimientos civiles, incluyendo a la *presunción de buena fe*, que es un principio general del derecho que está implícito en la Constitución Federal, a fin de no dejar en estado de indefensión al

posible afectado, ya que sólo teniendo la oportunidad de *desvirtuar* los hechos concretos que se le imputen, podrá demostrar su buena fe.

1a./J. 23/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 23/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA. Del artículo 22, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivan las siguientes premisas: 1) La acción de extinción de dominio sólo procede respecto de bienes que han sido instrumento, objeto o producto de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; 2) Al ejercer su acción, el Ministerio Público debe aportar al juicio relativo "elementos suficientes" para acreditar, en primer lugar, que tuvieron lugar los hechos ilícitos que se adecuan a la descripción normativa de los delitos mencionados, de acuerdo con la legislación penal que sea aplicable para juzgarlos; en segundo, que los bienes objeto del juicio fueron instrumento, objeto o producto de los delitos citados; y, en tercero, en el supuesto de que los bienes se hayan utilizado para la comisión de delitos por parte de un tercero, el representante social deberá aportar datos que razonablemente permitan sostener que ello se realizó con conocimiento del propietario de los bienes. Así, a falta de pruebas directas, la mala fe debe acreditarse adminiculando diversos indicios que conduzcan al juzgador a la convicción de que el afectado conocía y permitía la comisión de los delitos con sus bienes. Lo anterior implica una carga de la prueba dinámica, que no queda en forma absoluta en una sola de las partes, y que se compone de hechos concretos, susceptibles de acreditarse o desvirtuarse. Una interpretación contraria, además de conculcar el orden constitucional y validar la actuación arbitraria por parte de la autoridad, no cumpliría con la finalidad que persigue la figura de extinción de dominio, esto es, combatir a la delincuencia organizada.

1a./J. 19/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José

Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 19/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE.

Es afectado de buena fe la persona que tiene algún derecho real sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio, que acredite la legítima procedencia del bien y no existan evidencias de que haya participado o tenido conocimiento de la actividad delictiva; quien debe ser llamado al juicio relativo, en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, para deducir sus derechos con apego a sus garantías constitucionales, y sin privarlo de la posibilidad de defenderse. Ahora bien, en atención a lo anterior y en términos del artículo 22, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el afectado que afirma ubicarse en esa descripción debe demostrar, según sea el caso, tres cuestiones: 1) la procedencia lícita de los bienes; 2) que su actuación es de buena fe; y, 3) que estaba impedido para conocer la utilización ilícita de sus bienes. En lo que respecta al primero de esos puntos, su demostración es imperativa cuando la acción se funda en que los bienes sean producto del delito o existan indicios de que se trata de un prestanombre o testaferro, empero cuando se ejerce por el uso que se les da a esos bienes, la

prueba atinente a la procedencia lícita de los bienes pierde trascendencia. Por lo anterior y con independencia de que el afectado deba o no demostrar la procedencia lícita del bien, en todos los casos sólo puede defenderse acreditando que su actuación es de buena fe y que estaba impedido para conocer su utilización ilícita; sin embargo, acreditar la "buena fe" a falta de indicios o elementos de prueba que demuestren la mala fe del afectado, se torna prácticamente imposible. Por lo anterior, la interpretación del artículo 22, párrafo segundo, fracción II, inciso c), en relación con su fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere necesariamente que la parte actora aporte datos que, de forma razonable, permitan considerar la mala fe del afectado, o los indicios de que tuvo o debió haber tenido conocimiento de los hechos delictivos, ya que sólo dando al afectado la posibilidad de desvirtuar dichos datos o elementos puede demostrar que su actuación es de buena fe, en los términos señalados por la fracción citada. Lo anterior confirma el principio general del derecho que señala que la "buena fe" se presume y es acorde al principio ontológico de la prueba, pues lo ordinario, que viene a ser la buena fe se presume, y lo extraordinario, que es la mala fe, se prueba. Por tanto, la norma no debe interpretarse en el sentido de que la carga probatoria corresponde en su totalidad al afectado de buena fe, pues ello no lleva a un equilibrio entre la acción de extinción de dominio y las garantías constitucionales. Así, el precepto constitucional citado prevé el derecho de defensa del afectado de buena fe, y para que dicha defensa pueda generarse, debe partirse de que el ejercicio de la acción de extinción de dominio impone a la actora la obligación de aportar al juicio elementos suficientes para acreditar: a) que sucedió el hecho que se adecua a la descripción legal de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, contenidos en la legislación penal que sea aplicable para juzgar el delito que corresponda; b) que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos enumerados en el inciso anterior; y, c) que el dueño tuvo conocimiento de lo anterior.

1a./J. 18/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 18/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La acción de extinción de dominio tiene por objeto privar del derecho de propiedad a una persona, respecto de bienes que son instrumento, objeto o producto de los delitos previstos en el párrafo segundo, fracción II, del artículo 22 constitucional (delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas), sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna. Ahora bien, en relación con los procesos legislativos que dieron lugar a la incorporación de esa institución en el derecho mexicano, el órgano reformador de la constitución partió de dos premisas: 1) la extinción de dominio tiene por objeto introducir un régimen de excepción para combatir a la delincuencia organizada,

por la comisión de los delitos citados; y, 2) este régimen de excepción debía aplicarse restrictivamente y, por tanto, no utilizarse de forma arbitraria para afectar a personas, propietarios o poseedores de buena fe. En relación con la primera de esas proposiciones, el órgano legislativo advirtió reiteradamente la necesidad de contar con herramientas especiales para combatir un tipo especial de delincuencia que rebasó la capacidad de respuesta de las autoridades y que se distingue por sus características especiales en su capacidad de operación, la sofisticación de sus actividades, el impacto social de los delitos que comete y su condición de amenaza contra el Estado, reconociendo que los procesos penales vigentes no eran eficaces para afectar a la delincuencia organizada en su patrimonio, lo cual es indispensable para debilitar su estructura, aumentar sus costos, reducir sus ganancias, dificultar su operación y afectarlo de manera frontal; asimismo, señaló que, por regla general, los bienes que las bandas criminales utilizan para cometer delitos no están a nombre de los procesados y, aun cuando sea evidente que se utilizan como instrumento para el delito o que son producto de las operaciones delictivas, la falta de relación directa con los procesados impedía que el Estado pudiera allegarse de ellos. Así, la regulación de la extinción de dominio tuvo por objeto adecuar las estructuras constitucionales y legales para combatir eficazmente a la delincuencia organizada, al considerar que los mecanismos que existían con anterioridad eran insuficientes. Paralelamente, en relación con la segunda de las premisas apuntadas, el órgano reformador de la constitución destacó que dicha acción debía ejercitarse con absoluto respeto a la legalidad y al derecho de audiencia y al debido proceso; además, manifestó que un modelo eficaz no podía sustentarse exclusivamente en mayores facultades para las autoridades policiales sin control alguno, sino que debía contar con los equilibrios propios e indispensables que exige la justicia y, en general, un Estado democrático de derecho. Esto es, la acción de extinción de dominio no puede, entonces, proceder contra personas, propietarios o poseedores de buena fe con el objeto de que no se incurra en arbitrariedades; tampoco debe aplicarse indiscriminadamente a otro tipo de conductas ni utilizarse para facilitar las tareas del Ministerio Público en la persecución de delitos comunes. Consecuentemente, el análisis de las dos premisas en que se sustenta la acción de extinción de dominio, permite afirmar que el órgano reformador de la constitución buscó, en todo momento, un equilibrio entre el respeto a los derechos a la seguridad pública y a la justicia penal; de ahí que la acción de extinción de dominio no tiene por objeto anular o vaciar de contenido los mencionados derechos. Por tanto,

la interpretación del artículo 22 Constitucional no debe realizarse al margen de aquéllas sino que, por el contrario, deben complementarse, en la medida en que no se impida su objetivo, sobre todo cuando pueden estar involucradas personas afectadas que hayan procedido de buena fe.

1a./J. 15/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 15/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA. De la interpretación teleológica del artículo 22, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal, en el sentido de que el procedimiento de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo del de materia penal, se concluye que dicha separación no es absoluta, sino relativa, porque la autonomía a que se refiere la disposición constitucional citada debe entenderse como la independencia de aquel que juzga sobre el tema de la extinción de dominio y del que ha de emitir una decisión en cuanto a la responsabilidad de quien está sujeto al juicio penal, de forma que tal distinción involucra independencia: a) en la normatividad que cada uno de ellos ha de aplicar en el proceso del que es rector; b) en el desarrollo de cada uno de los juicios; y, c) en la decisión que adopten sobre temas respecto de los cuales no compartan jurisdicción (básicamente la responsabilidad penal, por no ser éste un tópico sobre el que ambos jueces deban decidir); sin embargo, tal disociación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total, de manera que, generalmente, el Juez de Extinción de Dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución intraprocesal, que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva, que el delito no se demostró. Al respecto, se parte de la base de que, desde su génesis, ambos procesos tienen como denominador común los hechos que dieron origen a una averiguación previa que, una vez escindida da lugar a dos tipos de juicio: 1) el penal (encaminado a la sanción por la comisión de delitos); y, 2) el de extinción de dominio (enderezado a declarar derechos patrimoniales), situación que impide afirmar la existencia de una autonomía absoluta, pues el propio artículo 22 constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sí. En efecto, el precepto constitucional citado prevé que la extinción de dominio procede respecto de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Así, dicho artículo permite afirmar válidamente que el legislador partió de la base de que, paralelamente al ejercicio de la acción penal, se ejercería la de extinción de dominio; de ahí que, en primer orden, el Estado (a través del Ministerio Público) habría de llevar a cabo las investigaciones para la persecución del delito e inclu-

so, en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal de contar con los elementos necesarios para ello, pues sólo así se explica la aclaración en el sentido de que la extinción de dominio procede "aun cuando no se haya dictado (en el proceso penal) la sentencia que determine la responsabilidad penal", lo que supone que ha habido al menos una calificación a cargo de la autoridad judicial penal sobre la existencia de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal, como presupuesto para el ejercicio de la acción de extinción de dominio.

1a./J. 21/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 21/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA PUEDE SER ACREDITADA POR EL AFECTADO CON LOS ELEMENTOS DE PRUEBA O INDICIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE, RAZONABLEMENTE, CONDUZCAN AL JUZGADOR A LA CONVICCIÓN DE QUE SU ORIGEN ES LEGAL. El artículo 22, fracción II, incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén los supuestos en que los bienes materia de la extinción de dominio, sean instrumento, objeto o producto del delito o que, siéndolo, estén intitulados a nombre de terceros (prestanombres o testaferros), da lugar a que el afectado deba demostrar la procedencia lícita del bien. Al respecto, la prueba de la procedencia lícita se traduce en que el titular del bien aporte elementos de prueba que razonablemente conduzcan al juzgador a la convicción de que el bien tiene un origen legal, como puede ser, enunciativa y no limitativamente, exhibir el instrumento público que demuestre que lo obtuvo por herencia, que lo adquirió por virtud de un préstamo bancario, o que a la fecha de adquisición del bien contaba con ingresos de procedencia lícita, ya sea mediante la exhibición de su declaración de impuestos, pagos provisionales de los mismos, constancias de retenciones de salarios, o de pagos a las instituciones de seguridad social, etcétera. Al respecto, no debe soslayarse que la carga de que se trata encuentra mayor dificultad cuando ha pasado bastante tiempo desde la adquisición del bien, en cuyo caso no se tiene la obligación de conservar la documentación mencionada (por ejemplo, los contribuyentes se encuentran obligados a conservar su documentación fiscal solamente por el plazo de cinco años); de manera que, en aquellos casos en que la adquisición del bien se haya realizado más de diez años atrás, atendiendo a que ése es el plazo mayor de prescripción que establece la ley, no sería razonable exigir que se almacene o archive toda la documentación y, por lo tanto, se demuestre en forma detallada y precisa el origen de cada peso con el cual se pagó el precio del bien; en tales casos, es posible aportar elementos de prueba o indicios que puedan razonablemente conducir al juzgador a la convicción de que el bien tiene procedencia lícita, ya sea con documentos, testimoniales o cualquiera otra prueba, siempre que no esté prohibida por la ley, en cuyo caso el juzgador debe atender a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, en relación con las circunstancias del

caso, al llevar a cabo su valoración. Lo anterior es importante para descartar la hipótesis del inciso d), fracción II, del artículo 22 constitucional, de manera que sólo aquel titular que acredite la procedencia lícita del bien, conforme al parámetro establecido, podrá ser considerado "afectado de buena fe", para los efectos del inciso c), fracción II, del artículo 22 constitucional. Lo anterior, ya que en caso contrario se estaría incumpliendo con la finalidad que persigue la extinción de dominio, esto es, privar a la delincuencia organizada de su patrimonio, al encontrar un obstáculo en el mero hecho de que el bien esté intitulado a favor de un tercero, cuando sea evidente que los bienes materia de la acción se utilizan como instrumento para el delito o que son producto de operaciones delictivas.

1a./J. 17/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López,

Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 17/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, LA ACCIÓN RELATIVA ESTÁ SUJETA A QUE EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL EMITA ALGUNA DECISIÓN EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL. La fracción I, del citado numeral, prevé que el procedimiento de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo del de materia penal; autonomía que debe entenderse relativa ante la vinculación que, desde su origen, guardan ambos procedimientos en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito, de forma que, por regla general, la acción de extinción de dominio está sujeta a que el juez de la causa penal haya emitido alguna decisión (en orden de aprehensión o comparecencia, auto de formal prisión o de sujeción a proceso) en la que afirme que los hechos consignados por el Ministerio Público acreditan el cuerpo del delito de alguno de los ilícitos previstos en la fracción II del precepto constitucional citado, para dar seguridad jurídica desde el inicio del juicio de extinción de dominio. Al respecto, no queda inadvertido que una decisión judicial de esa naturaleza está sujeta a que exista una consignación ante el juez penal, lo que supone que se conoce de la existencia de algún sujeto a quien se le imputa la comisión del delito; sin embargo, con el conocimiento de que existen casos en los que el Ministerio Público está imposibilitado para ejercer la acción penal porque, a pesar de haber localizado bienes que, por ejemplo, se emplean como instrumento u objeto del delito, e inclusive que son producto de aquél, se desconoce la identidad del probable responsable de su comisión, supuesto en el cual, no sería posible ejercer la acción penal ni, por ende, obtener una resolución judicial en la que se califique si los hechos consignados constituyen o no uno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional. En esas circunstancias, debe admitirse que tales casos constituyen una excepción a la regla y que, entonces, ante la falta de calificación del delito a cargo del juez de la causa penal, corresponde al de extinción de dominio, a partir de los elementos aportados por el Ministerio Público, resolver si con ellos se demuestra la comisión del hecho ilícito, en cuyo caso, el estándar de prueba se torna de mayor rigor para la Representación

Social; aspecto que el juez de extinción de dominio deberá determinar en cada caso. Así, dicha excepción tiene lugar porque, lo que es irrelevante en el juicio de extinción de dominio, es la decisión que el juzgador penal adopte sobre la probable responsabilidad penal del inculpado o su culpabilidad en sentencia definitiva, pues tal responsabilidad no constituye uno de los elementos necesarios para declarar extinto el dominio del propietario; sin embargo, lo que trasciende es la no comprobación del hecho ilícito. En ese sentido, el juez de extinción de dominio está facultado para requerir oficiosamente, al juzgador ante quien se siga la causa penal, antes de resolver en definitiva, las constancias del juicio para resolver de forma congruente con la de su homólogo penal, en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito que genere el ejercicio de la acción de extinción de dominio, si acaso aquél ha dictado una resolución de naturaleza intraprocesal en donde se decrete la no acreditación del cuerpo del delito, o bien, la no demostración del delito tratándose de sentencia definitiva. Por lo anterior, se concluye que existe una vinculación entre uno y otro juicio, en lo referente a la acreditación del hecho ilícito, de forma que, aun en el supuesto de que el juicio de extinción de dominio haya iniciado con aplicación de la excepción mencionada (es decir, sin una decisión a cargo del juez de la causa penal), en caso de que durante el trámite del juicio de extinción de dominio exista alguna consignación al juez penal a cargo del Ministerio Público por los hechos que dieron lugar a la extinción de dominio y que, por ende, aquél llegue a emitir alguna decisión sobre la no acreditación del hecho ilícito, deberá retomarse la regla general y entonces, su decisión impactará en la actuación del juez de extinción de dominio si acaso éste hubiese resuelto que sí estaba probado ese aspecto.

1a./J. 22/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 22/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. RELEVANCIA DE LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA. El artículo 22, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversos supuestos que pueden originar la pretensión de la extinción de dominio, cuyos elementos a demostrar son diferentes en cada caso. Así, cuando la acción relativa se ejerce sobre la base de que el bien es instrumento del delito o utilizado en su comisión, la prueba de la procedencia lícita de los bienes, si bien no es inútil, sí pierde relevancia, ya que no se cuestiona su procedencia, sino el uso que se le da. Ahora, a diferencia de dicha hipótesis, cuando se asevera que el bien es "producto del delito", ello implica que se adquirió con recursos obtenidos con la comisión del hecho ilícito, por lo que cobra mayor peso la prueba sobre su adquisición con recursos de procedencia lícita y, en estos casos, el afectado tiene la carga de demostrar un hecho concreto positivo: la procedencia lícita del bien. Asimismo, la prueba de la procedencia lícita de los bienes es trascendente cuando existe una relación de confianza entre una o varias de las personas a las que se les atribuye la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 22 citado (delincuencia orga-

nizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas) y quien aduce ser un "afectado de buena fe", en cuyo caso debe descartarse la posible actualización de la hipótesis del inciso d), de la fracción II, del precepto referido, que regula el caso de los prestanombres o testaferros.

1a./J. 16/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo en revisión 969/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 58/2011. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 3/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Horacio Nicolás Ruiz Palma.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 16/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.

AMPARO DIRECTO 22/2013. 22 DE OCTUBRE DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ, ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ, ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS, HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA Y JULIO CÉSAR RAMÍREZ CARREÓN.

III. Competencia y oportunidad

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada; y 21, fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de ese mes y año, toda vez que se trata de un amparo directo cuya especialidad corresponde a esta Sala, la cual ejerció la facultad de atracción para conocer de este asunto.

17. La resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa por boletín judicial el nueve de octubre de dos mil doce, surtiendo sus efectos el diez de octubre siguiente, por tanto, el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, empezó a correr a partir del **once de octubre al cinco de noviembre del mismo año**, descontando los días doce, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, así como del uno al cuatro de noviembre de ese año, por ser inhábiles, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

18. Por tanto, si la parte quejosa presentó su demanda ante la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el **treinta de octubre de dos mil doce**, es de concluirse que se presentó oportunamente.

IV. Existencia del acto reclamado

19. Es cierto el acto reclamado a la Sala responsable, tal como lo manifestó en su informe justificado, lo cual se corrobora con los autos originales del toca de apelación **********.

V. Consideraciones y fundamentos

20. **Cuestiones necesarias para resolver el asunto.** A continuación, se sintetiza la resolución de la responsable y los conceptos de violación:

21. **Sentencia reclamada.** Las consideraciones sustentadas por el tribunal de apelación fueron, en esencia, las siguientes:

21.1. Sostuvo que la sentencia recurrida se encuentra dictada, de acuerdo con el principio de congruencia, toda vez atiende a la materia de la litis.

21.2. Por otra parte, sostuvo que, contrariamente a lo que aduce la apelante, sí existe un evento típico constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, toda vez que de la averiguación previa se advierte que se llevó a cabo un evento típico consistente en robo de vehículo. En ese sentido, agregó que la averiguación previa relativa al juicio de extinción de dominio no quedó sin efectos en virtud de la resolución dictada por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ya que dicha resolución no altera el procedimiento de extinción de dominio, dada su autonomía.

21.3. Señaló que el evento típico sucedió, tal cual consta en la averiguación previa **********, de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Robo de Vehículo y Transporte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y reiteró que ninguna resolución dentro del procedimiento penal es vinculante respecto de las resoluciones que se dicten en el procedimiento de extinción de dominio; de ahí que la inconforme no obtenga beneficio alguno de lo resuelto en el procedimiento penal.

21.4. Sostiene que no tiene razón la apelante, en cuanto a que no se reúnen los requisitos previstos por los artículos 4 y 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, toda vez que aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, sí existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

21.5. Máxime que la afectada, al desahogar la prueba confesional a su cargo en audiencia de dieciocho de mayo de dos mil doce, al absolver las

posiciones décima y décima primera, **reconoció que su nieto,** **********, **robó la motocicleta, la cual ocultó en el inmueble controvertido**.

22. **Conceptos de violación.** La quejosa aduce, en síntesis, lo siguiente:

22.1. La parte quejosa impugnó que se le condenara a la reparación del daño a favor de la víctima **********, sin tomar en consideración el contenido de las actuaciones derivadas del juicio de amparo **********, en el que el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó a **********, la protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Juez Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal, en la causa penal **********, lo que conlleva a la afectación del inmueble de su propiedad.

22.2. Asimismo, refiere que la sentencia reclamada declara infundados sus agravios, sin considerar que no existe un evento típico constitutivo de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, en franca contradicción con la resolución dictada en el juicio de amparo que concedió la protección constitucional a **********, ordenándose dejar insubsistente el auto de formal prisión por el delito de robo agravado y, en su lugar, dictar una nueva resolución en la que se declarara que no existen pruebas suficientes para acreditar el cuerpo del delito que motivó el ejercicio de la acción penal.

22.3. Señala que aunque los artículos 4 y 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal establecen que es procedente la acción de extinción de dominio, previa declaración jurisdiccional respecto de aquellos bienes que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, al haberse resuelto por el Juez Federal que no existen elementos para integrar el cuerpo del delito del mencionado robo agravado, ello significa la no existencia del delito y, por tanto, carece la autoridad responsable de fundamentación y motivación para emitir el acto reclamado.

22.4. Refiere que en grave violación a sus garantías individuales de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, la autoridad responsable condenó a la parte demandada a la reparación del daño, pretendiendo una indemnización a favor del supuesto ofendido **********.

En el apartado propiamente de conceptos de violación, la parte quejosa hizo las **argumentaciones de inconstitucionalidad** que, enseguida, se exponen:

22.5. El Decreto por el que se expide la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es violatorio de los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Federal y sexto transitorio del decreto de reformas a la Constitución en materia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, pues conforme al primer precepto, la facultad de dictar leyes en materia de delincuencia organizada es exclusiva de la Federación y, conforme al segundo, las legislaciones en delincuencia organizada de las entidades federativas se mantendrán en vigor hasta que el Congreso ejerza la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada y, en este tenor, la cláusula de tránsito constitucional prorroga la validez de las normas vigentes, pero no autoriza a las entidades federativas a dictar nuevos actos legislativos, pues la competencia es exclusiva de la Federación.

22.6. Al ser la Ley de Extinción de Dominio en trato una regulación directamente relacionada con la delincuencia organizada, es claro que la Asamblea Legislativa carece de competencia para su emisión, con lo que también se vulnera el artículo 16 constitucional, al carecer la norma de fundamentación.

22.7. El artículo 2, fracción VI, de la citada ley, es inconstitucional, al incluir dentro de los delitos que son causa de la extinción de dominio a la extorsión, pues ésta no se encuentra contemplada en el artículo 22 constitucional.

22.8. Los artículos 2, fracción XIX, 8, párrafos segundo y tercero, 27, fracciones II y III, 41, párrafo segundo, y 50, párrafo cuarto, al regular la extinción de dominio únicamente como un medio para obtener la reparación del daño, pues esta figura se encuentra especialmente ligada con la materia penal y la civil, violan el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que, conforme a este precepto, la reparación del daño debe ser solicitada por el agente del Ministerio Público.

22.9. Además, se viola el artículo 22 constitucional, al desnaturalizar la figura de extinción de dominio.

22.10. El artículo 3, fracciones II y III, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, es inconstitucional, por violación a la garantía de certeza jurídica, pues al regular la supletoriedad en el caso de las medidas cautelares, remite a dos códigos de procedimientos distintos, el civil y el penal, siendo que este último no regula medidas cautelares.

22.11. El artículo 9, fracción I, es violatorio de los artículos 22 y 27 constitucionales, pues la figura de extinción de dominio pretende sancionar la utilización de bienes para fines ilícitos respecto de delitos específicos especialmente

graves; sin embargo, al extender la extinción a bienes que no fueron utilizados en la comisión del ilícito o que no son producto de éste, desnaturaliza la figura de la extinción de dominio, y se atenta contra el derecho de propiedad, pues se realiza una confiscación de bienes.

22.12. El artículo 10 de la ley en cita, se impugna por violatorio del artículo 14 constitucional, en tanto que existe una contradicción en la ley, puesto que, conforme al artículo 15, los bienes fungibles, genéricos, muebles susceptibles de deterioro o pérdida y los demás que en adición a los anteriores determine la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, podrán ser enajenados al mejor postor o en condiciones de mercado, de acuerdo con la legislación financiera vigente, y el precepto impugnado regula que se puede disponer de los bienes sujetos a la acción hasta la sentencia ejecutoriada.

22.13. El artículo 11 vulnera el artículo 16 de la Constitución Federal, porque permite que las medidas cautelares dictadas por el Ministerio Público permanezcan durante el juicio sin que puedan ser revocadas por el Juez.

22.14. El artículo 13, párrafo primero, es violatorio del artículo 22 de la Constitución Federal, porque permite que los bienes sujetos a medidas cautelares puedan ser arrendados, pues el objeto de estas medidas es que no sufran menoscabo, extravío o destrucción, pero no generar ganancias con el posible deterioro de la cosa, lo que resultará del todo injusto si el afectado es absuelto, pues sus bienes se habrán deteriorado con el arrendamiento, sin que nadie se haga cargo de ello.

22.15. El artículo 18 es inconstitucional, porque sólo prevé la posibilidad de apelar las medidas cautelares tomadas por el Juez, pero no aquellas tomadas por el agente del Ministerio Público, previamente al ejercicio de la acción.

22.16. Los artículos 29, fracción I, y 39, párrafo primero, violan el artículo 14 constitucional, en específico, a la garantía de certeza jurídica, pues dicha fracción remite para la determinación del concepto "eventos típicos", al artículo 4 de la citada Ley de Extinción de Dominio; sin embargo, en este precepto no se regula esa definición.

22.17. El artículo 38 es violatorio de los artículos 17 y 122 constitucionales, al vincular al Juez a una decisión del agente del Ministerio Público y no darle oportunidad de tomar otras medidas para lograr la localización de las personas a las que se deba notificar.

22.18. El artículo 39, párrafo tercero, es violatorio del artículo 17 constitucional, al no permitir el recurso de apelación contra la admisión de la acción, puesto que se vincula al afectado a soportar la carga de un juicio, cuando es probable que no existan los elementos suficientes para acreditar la existencia de alguno de los elementos típicos.

22.19. El artículo 50, párrafo tercero, violenta el artículo 14 constitucional, al privar de sus derechos de garantía a los acreedores prendarios o hipotecarios o con cualquier otro tipo de garantía, sin escucharlos en el procedimiento y, además, sin causa probada de responsabilidad. Además, debe tomarse en cuenta que es probable que los bienes sí fueran adquiridos de manera lícita, por lo que aquéllos no tendrían ninguna responsabilidad en el destino del bien.

22.20. También el citado numeral es violatorio del artículo 1o. constitucional, que regula el principio de igualdad, toda vez que decide extinguir los derechos de garantía de los acreedores, pero no así los de las instituciones del sistema financiero, pues la distinción resulta irrazonable.

22.21. El artículo 54 es violatorio de los artículos 1o. y 17 constitucionales, al regular de la misma manera la situación de quienes sean condenados y quienes sean absueltos, financiando los gastos generados con el trámite de la acción y la administración de los bienes, puesto que al no distinguir situaciones diferentes, es sobre comprensiva y hace recaer en el patrimonio del absuelto una carga de la que no tiene responsabilidad. Además, se viola el principio de presunción de inocencia al obligarle a pagar los gastos y la administración.

En un diverso apartado de la demanda de amparo denominado como "agravios", la parte quejosa hace valer las manifestaciones siguientes:

22.22. En el procedimiento de origen no se valoraron debidamente las pruebas que se desahogaron en su oportunidad.

22.23. Además, el juzgador debió tomar en cuenta que la carga de la prueba y la demostración y acreditación de los elementos de la acción ejercida deben ser a cargo de la accionante y no de la parte demandada.

22.24. Tampoco se valora el contenido del artículo 2 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, ya que no existe base alguna para que se le sentencie a la extinción de dominio del inmueble de su propiedad, por la simple razón de que no existe un evento típico referente a delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, lo cual se puede

comprobar de la lectura de la causa penal **********, seguida por el delito de robo ante el Juez Cuadragésimo Segundo de lo Penal del Distrito Federal, en la que se aprecia la resolución dictada en el juicio de amparo **********, por el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en la que concedió la protección de la Justicia de la Federación en contra del auto de formal prisión.

22.25. Además, la existencia de un evento típico que dio lugar al hecho ilícito contemplado en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, no se encuentra plenamente demostrado, pues se basa en las actuaciones de la averiguación previa **********, y no en las actuaciones de la causa penal **********, de las que se advierte que se otorgó la protección de la Justicia Federal por no acreditarse los elementos del tipo de robo de vehículo, por lo que, al no haberse acreditado el cuerpo del delito, no existe la premisa fundamental exigida por los artículos 4 y 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, para condenar a la que ahora es parte quejosa a la pérdida de los derechos del inmueble de su propiedad.

22.26. Se violentan los principios rectores del procedimiento en general, toda vez que la sentencia impugnada, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Extinción de Dominio en cita, condena a la parte demandada a la reparación del daño en forma injustificada, e incluso, puede suscitarse una contradicción de materias, pues en la causa penal en la que no se acreditó el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad, no puede existir una obligación de reparación del daño como la decretada en la sentencia impugnada.

22.27. La naturaleza de la extinción de dominio es civil y no penal, pero la esencia o sustancia de dicha acción en realidad es punitiva, e incluso, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos de trece de diciembre de dos mil siete, lo establecen como un decomiso.

VI. Estudio

23. En atención al contenido de los conceptos de violación expresados y por razón de orden metodológico, el análisis de los conceptos de violación se realizará a partir de las siguientes preguntas:

• ¿La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para legislar en materia de extinción de dominio?

• ¿Cómo debe interpretarse el artículo 22 constitucional?

• ¿Cuáles son los alcances de la autonomía entre el proceso penal y el proceso de extinción de dominio que prevé dicha norma constitucional?

• En este preciso asunto, ¿Tiene algún impacto lo resuelto en el juicio penal sobre la no acreditación del delito?

¿**La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para legislar en materia de extinción de dominio**?

24. En relación con esta interrogante, el quejoso aduce que la expedición de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal es inconstitucional, toda vez que viola los artículos 73, fracción XXI, y 133 de la Constitución Federal, y sexto transitorio del decreto de reformas a la Constitución en materia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, pues conforme a esas disposiciones, la facultad de dictar leyes en materia de delincuencia organizada es exclusiva de la Federación.

25. Agrega que, si bien existe una cláusula de tránsito constitucional que establece que las legislaciones en delincuencia organizada de las entidades federativas se mantendrán en vigor hasta que el Congreso ejerza la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada, tal norma de tránsito prorroga la validez de las normas vigentes, pero no autoriza a las entidades federativas a dictar nuevos actos legislativos, ya que la competencia es exclusiva de la Federación y que, por tanto, al ser la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal una regulación directamente relacionada con la delincuencia organizada, es claro que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal carecía de competencia para su emisión.

26. Tales disidencias son infundadas.

27. Para explicar lo anterior, en primer lugar, cabe hacer un paréntesis, a fin de analizar el sistema de competencias que la Constitución Federal otorgó al Congreso de la Unión, al Distrito Federal y al resto de las entidades federativas.

28. Conforme lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[4] nuestro país se encuentra constituido como

[4] "**Artículo 40.** Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental."

una *república representativa, democrática y federal*, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, empero, unidos en una Federación, los cuales se asocian delegando algunas facultades a la Federación, acorde con los postulados previstos en la propia Ley Fundamental.[5]

29. En lo que atañe al Distrito Federal, debe decirse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 de nuestra Carta Magna,[6] el mismo es una entidad federativa, parte integrante del Estado Federal Mexicano, pero, además, es la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.[7]

30. Ahora bien, en lo que refiere al régimen de competencias entre los Estados y la Federación, la *regla general* es que en nuestro sistema, por disposición expresa del artículo 124 de la Constitución Federal, rige la *competencia residual*, en virtud de la cual, las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Ley Fundamental a la Federación, se entienden reservadas a los Estados.

31. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, la regla es a la inversa, según consta en el artículo 122 constitucional que, en lo que interesa, se reproduce a continuación:

"**Artículo 122.** Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

---

[5] El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, que en su artículo 4o. señalaba que: "La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal.", y en el artículo siguiente mencionaba a las partes integrantes de la Federación. El modelo de "Estado Federal" fue tomado de la Constitución norteamericana, en el caso de México. Sin embargo, al revés de como sucedió en el país de origen de la institución, el federalismo no sirvió para conjuntar realidades anteriores y en cierta forma dispersas, sino para crear unidades descentralizadas dentro de un país con tradiciones fuertemente centralistas heredadas del periodo colonial.

[6] "**Artículo 43.** Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el **Distrito Federal**."

[7] "**Artículo 44.** La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General."

"Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

"La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno.

"...

"La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

"A. Corresponde al Congreso de la Unión:

"I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa."

32. Luego, de la simple lectura del precepto constitucional anterior, claramente se advierte que el Distrito Federal tiene su propio cuerpo legislativo a nivel local denominado "*Asamblea Legislativa del Distrito Federal*", y que éste sólo está facultado para legislar en aquellas materias que le han sido delegadas ***expresamente***.

33. En efecto, de la norma transcrita se advierte que corresponde al Congreso de la Unión legislar en lo relativo al Distrito Federal, *salvo* en aquellas materias conferidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por delegación expresa.

34. El artículo 122 constitucional, apartado C, base primera, fracción V, enumera las facultades que han sido delegadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como sigue:

"**C.** El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

"**Base primera.** Respecto a la Asamblea Legislativa:

"...

"**V.** La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

"a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;

"b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

"...

"Dentro de la Ley de Ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

"...

"La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa.

"Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución;

"c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.

"La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de Ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea.

"...

"d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de Gobierno del Distrito Federal;

"e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad;

"f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, diputados locales y Ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales;

"g) Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos;

"h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y Registro Público de la Propiedad y de Comercio;

"i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

"j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

"k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;

"l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función

social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

"m) Expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos;

"n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal;

"ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y (sic)

"o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia asamblea, y

"p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución. …"

35. Las facultades señaladas son esencialmente coincidentes con las establecidas en el artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

36. Hechas las anteriores precisiones sobre la distribución legislativa en el sistema mexicano, es momento ahora de dar respuesta a los agravios expresados, en los que fundamentalmente se alega que corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de delincuencia organizada y que, por tanto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal carece de facultades para emitir una ley sobre extinción de dominio, dado que esa materia corresponde, precisamente, al tema de delincuencia organizada. Esas inconformidades son infundadas.

37. En primer orden, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad **********,[8] emitió algunas consideraciones sobre la competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cuyo análisis acudió a lo resuelto

[8] Resuelto en sesión de dieciocho de febrero de dos mil catorce. En ese asunto se determinó que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para legislar en materia de extinción de dominio, por mayoría de siete votos de los Ministros Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas y Pérez Dayán. Los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo y presidente Silva Meza votaron en contra. El Ministro Valls Hernández estuvo ausente.

por el propio Pleno en la controversia constitucional **********,[9] en donde se estableció un test para determinar si al Distrito Federal le corresponde el ejercicio de determinada competencia, al tenor de lo que enseguida se reproduce:

"… el Distrito Federal al ser la sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos es una entidad singular ya que las funciones legislativas, ejecutiva y judicial en esa localidad corresponden a los Poderes Federales, con la concurrencia de las autoridades locales.

"Así, consideramos que el artículo 122 de la Constitución Federal, al disponer, expresamente, en su sexto párrafo: '... La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: ...', establece un principio de división funcional de competencias entre los Poderes de la Unión y los órganos de Gobierno del Distrito Federal, a la vez que remite al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

"Así, en el Distrito Federal este principio de división funcional de competencias se desarrolla tanto constitucional como estatutariamente mediante la atribución de competencias expresas conferidas tanto a los Poderes de la Unión como a todos y cada uno de los órganos de Gobierno del Distrito Federal.

"En este sentido, dicho principio limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que al respecto establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

"Ahora bien, este principio de división funcional de competencias establecido en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a su vez remite al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, puede verse transgredido si se afecta el ejercicio de las competencias que tenga atribuidas a su favor cualquiera de los órganos o poderes a los que les competan.

"Sin embargo, para llegar a determinar ello, se debe establecer un estándar que dará pauta para determinar a quién corresponde el ejercicio de la

[9] Resuelto el siete de noviembre de dos mil seis, por mayoría de nueve votos, donde fue ponente el Ministro José Ramón Cossío Díaz.

competencia, y si este ejercicio transgrede o no el principio de división funcional de competencias. Para ello, debemos realizar los siguientes pasos:

"1. **Encuadramiento.** Realizar un análisis y estudio para determinar en qué materia competencial se encuentra el acto desplegado por el órgano o poder, es decir, debemos encuadrar la competencia ejercida y cuestionada, para lo cual se tiene que analizar la materia propia, es decir, si se trata por ejemplo de cuestiones de seguridad pública, presupuestarias, electorales, educación, etcétera.

"2. **Ubicación.** Dado que en el Distrito Federal existe, como ya dijimos, una concurrencia entre los Poderes Federales y las autoridades locales en las funciones legislativas, ejecutiva y judicial de esta entidad, debemos analizar si esa materia ya identificada es facultad de los Poderes Federales o de las autoridades locales, ello de conformidad con las disposiciones establecidas tanto en el artículo 122 constitucional como en los preceptos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

"En este sentido, debemos constatar que la actuación del órgano o poder emisor del acto descanse en una norma, ya sea constitucional o estatutaria, que otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y estatutaria de la esfera competencial de las autoridades.

"Finalmente, determinar si la competencia ejercida efectivamente le correspondía al Poder Federal que haya actuado o al órgano o autoridad del Distrito Federal que la haya desplegado.

"3. **Regularidad.** Una vez que se determine lo anterior, se deberá analizar si el órgano o poder que ejerció la competencia que le correspondía, lo hizo sin violentar la esfera de competencias que otros órganos o poderes del mismo ámbito tienen previsto para el ejercicio de sus funciones."

38. Con la aplicación de ese test, en la acción de inconstitucionalidad **********, el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo lo siguiente:

"… en términos del artículo 122 constitucional, apartado C, base primera, fracción V, inciso h), la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, puede legislar en las materias civil y penal, sin embargo, del análisis de la figura de extinción de dominio se advierte que no pertenece de manera específica a sólo una de esas materias.

"El artículo 22 constitucional que la crea establece, puntualmente, que su procedimiento debe ser jurisdiccional y autónomo del de materia penal.

Pero eso no la convierte en una acción de naturaleza civil, dado que no puede desvincularse de su origen, pues está íntimamente relacionada con la comisión de hechos ilícitos tipificados como secuestro, robo de vehículos, trata de personas, delitos contra la salud y delincuencia organizada.

"Por otra parte, su finalidad consiste en declarar la extinción de un bien por estar vinculado con el hecho ilícito de que se trata, lo que tampoco es propio del derecho civil, pues éste tiene como base regular relaciones y dirimir conflictos de derecho privado, y en la especie dicha acción la ejerce el Estado como herramienta con fines sancionatorios, lo cual también permite advertir cierta coincidencia con la materia administrativa.

"De esta manera, con independencia de que se considere a la figura de extinción de dominio como propia de la materia civil o penal o una combinación de éstas, lo cierto es que en todas estas materias la asamblea legislativa tiene competencia legislativa."

39. Cabe destacar que la generalidad del análisis así efectuado atiende a que, en aquel preciso asunto no se expresaron motivos de disidencia, en torno a las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para emitir la Ley de Extinción de Dominio; sin embargo, sí fue materia de discusión y, por ende, de decisión a cargo del Tribunal Pleno.

40. Ahora bien, en el presente asunto la posición del quejoso es en el sentido de que la extinción de dominio se dirige exclusivamente a la delincuencia organizada, respecto de la cual, la competencia está dada en el ámbito federal, pues corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre esa materia; sin embargo, tales aseveraciones son inexactas.

41. Para arribar a esa conclusión, se toma en cuenta la metodología adoptada al resolverse la acción de inconstitucionalidad **********, y se procede a realizar el primer paso del test propuesto en la controversia constitucional **********, esto es, verificar el encuadramiento, la ubicación y la regularidad de la facultad que se cuestiona.

42. Por lo que hace al **encuadramiento**, éste consiste en realizar un análisis y estudio para determinar en qué materia competencial se encuentra el acto desplegado por el órgano o poder, para lo cual debe analizarse la materia propia sobre la cual, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llevó a cabo sus facultades legislativas.

43. Ahora bien, dadas las particularidades de este asunto, ese primer paso debe llevarse a cabo de manera simultánea con el segundo que corresponde

a la **ubicación**, pues ambos guardan una íntima relación ante el planteamiento formulado por el quejoso, cuenta habida que ese último consiste en analizar si esa materia ya identificada es facultad de los Poderes Federales o de las autoridades locales, ello de conformidad con las disposiciones establecidas tanto en el artículo 122 constitucional, como en los preceptos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

44. En ese sentido, es necesario esclarecer si, como lo afirma el recurrente, la extinción de dominio es exclusiva de la delincuencia organizada, o si esto no es así, sobre lo cual debe decirse que, de acuerdo a los trabajos legislativos, es cierto que la intención del legislador fue implementar medidas eficaces de combate a la delincuencia organizada, entendida ésta como aquella cuya capacidad de operación, organización y sofisticación de sus actividades representan, efectivamente, un riesgo para el Estado.

45. Ahora bien, para determinar su naturaleza y su finalidad, conviene analizar los procesos legislativos de la reforma al precepto constitucional en análisis. En la iniciativa presentada por el mismo grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de veintinueve de marzo de dos mil siete, se manifestó lo siguiente:

"Cámara de Origen: Diputados
"Exposición de motivos
"México, D. F., a 29 de marzo de 2007.
"4. Iniciativa de diputado (grupo parlamentario del PRI)

"Que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado **********, del grupo parlamentario del PRI.

"César Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

"**Exposición de motivos**

"Es innegable que en la percepción de la sociedad mexicana, la delincuencia en el país ha alcanzado niveles alarmantes, pues no dejan de ocurrir acontecimientos violentos a consecuencia del **crimen organizado** en el territorio nacional.

"La seguridad pública es, sin duda, uno de los retos más importantes que tiene el Estado. La delincuencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia; ésta ha alcanzado un elevado grado de sofisticación, organización y equipamiento, que la fortalecen, haciendo más complejo su combate.

"Ante esta situación, las autoridades deben reaccionar firmemente, cuidando la implantación de figuras jurídicas modernas y eficaces de obvia legalidad.

"Este fenómeno delictivo emergente es consecuencia de la débil política social de prevención y de diversos factores que fomentan la realización de conductas delictivas.

"Es incorrecto considerar que figuras como la expropiación sean herramientas jurídicas para llevar a cabo aseguramientos o cualquier otro tipo de medida cautelar, pues no se deben mezclar instrumentos jurídicos de distinta naturaleza; en este caso, la administrativa con la penal.

"Asimismo, es necesario admitir que figuras jurídicas como el decomiso y el aseguramiento de los medios comisivos ya vigentes, son insuficientes para combatir de manera eficaz a la delincuencia.

"Se deben instrumentar una serie de mecanismos en aras de cubrir las diversas aristas del problema; uno de ellos es, precisamente, la extinción de dominio de bienes, esto es, la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, figura que debe ser analizada para efecto de valorar su pertinencia.

"Es pertinente la creación de figuras jurídico-penales *ad hoc* que atiendan este fenómeno, y que observen los principios de un sistema democrático de justicia penal.

"En este orden de ideas formulo una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 22, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la figura denominada 'extinción de dominio', que se sustenta en bases sólidas de un moderno derecho penal.

"...

"De prosperar este planteamiento se combatiría más eficazmente el crimen, se menguarían sus recursos materiales y económicos, observando siempre el principio de legalidad y los específicos que deben estar presentes en un sistema garantista, respetuoso de los derechos de todas las personas,

a fin de privilegiar el imperio del derecho en las acciones de justicia." (el énfasis es añadido)

46. Por su parte, el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, en lo que interesa, estableció lo siguiente:

"Con la extinción de dominio se buscó crear una figura más novedosa y menos complicada en su aplicación, que permita al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existan datos para acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, o que están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos.—Dicha modificación tiene como objetivo el enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo.—Cabe señalar que, en la actualidad, la suerte de los bienes instrumento, objeto o producto de un delito depende, en primer término, de que exista un aseguramiento. Asimismo, es indispensable esperar la declaratoria de responsabilidad penal plena de una o varias personas. Sin embargo, en ocasiones los bienes pueden no tener una relación directa con los procesados, aun cuando haya elementos para determinar que son instrumento, objeto o producto del delito, o están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de un delito.—En este sentido, con la finalidad de encontrar una herramienta eficaz que coadyuve a **desmembrar las organizaciones delictivas** y limitar sus efectos nocivos, impedir que se reproduzcan, pero principalmente decomisar sus activos, se considera necesario crear un procedimiento jurisdiccional y autónomo del proceso penal." (el énfasis es añadido)

47. Asimismo, el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores estableció, en lo que interesa, lo siguiente:

"En efecto, estas comisiones comparten la idea de que para hacer prevalecer el Estado democrático de derecho en nuestro país, deben por un lado adecuarse las estructuras constitucionales y legales existentes, a fin de dar respuesta con mayor efectividad al grave fenómeno delictivo que nuestro país padece, sin conculcar los derechos fundamentales de las personas tutelados en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

"... **es necesaria la incorporación de algunas reglas particulares aplicables a los casos de delincuencia organizada**, que vienen a constituir alguna restricción a las garantías, a efecto de atender puntualmente lo previsto por el artículo 1o. de la Constitución en el sentido de que las excepciones a los derechos fundamentales reconocidos por ella deben contenerse en la misma, consecuentemente se incrementan las referencias a la delincuencia organizada a lo largo de los artículos de la parte dogmática, así que es pertinente, en aras de la claridad que debe tener la Norma Suprema, para hacerla asequible a cualquier habitante del país y entonces generar seguridad jurídica, establecer de manera general y explícita qué se entiende por delincuencia organizada.

"... La definición propuesta establece: 'Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.'

"Es importante considerar que esta definición contiene elementos que permiten distinguir este tipo de delito respecto de los tradicionales de asociación delictuosa, puesto que la finalidad de ésta es cometer los delitos previstos por la ley de la materia, no cualquier delito.

"En ese sentido es fundamental destacar que **el régimen de delincuencia organizada se crea para el tratamiento de un fenómeno muy particular de delincuencia**. Un fenómeno que por sus características especiales en la capacidad de operación de la organización, la sofisticación de sus actividades, el impacto social de los delitos que comete y, en general, su condición de amenaza en contra del Estado, requiere de un tratamiento especializado. **El régimen no se crea para facilitar las tareas del Ministerio Público en la persecución de delitos comunes. De esta manera, el régimen de delincuencia organizada no puede ser utilizado para la persecución de cualquier tipo de organización criminal, sino únicamente de aquellas que por sus características representen efectivamente un riesgo para el Estado**.

"...

"Es importante señalar que la colegisladora señala en sus considerandos que **las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada, están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad, y de ninguna manera podrán usarse para otras conductas**, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas, ..."

"Estas comisiones dictaminadoras coinciden con la colegisladora en la necesidad de establecer nuevos elementos que contribuyan a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y otorguen mejores mecanismos para el combate a la delincuencia organizada."

"Por lo que hace a la extinción de dominio, se buscó crear una figura novedosa y menos complicada en su aplicación, a fin de que permita al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existan datos para acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, o que están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos. Dicha modificación tiene como objetivo el enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo.

"Es necesario enfatizar que actualmente la suerte de los bienes instrumento, objeto o producto de un delito depende, en primer término, de que exista un aseguramiento, además de que se hacía necesario esperar la declaratoria de responsabilidad penal plena de una o varias personas, ello sin contar que en ocasiones los bienes podían no tener una relación directa con los procesados, aun cuando hubiese elementos para determinar que son instrumento, objeto o producto del delito, o están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de un delito.

"En este sentido, con la finalidad de encontrar una herramienta eficaz que coadyuve a desmembrar las organizaciones delictivas y limitar sus efectos nocivos, impedir que se reproduzcan, pero principalmente decomisar sus activos, se comparte el criterio de la Cámara de Origen de considerar necesario crear un procedimiento jurisdiccional y autónomo del proceso penal que establezca en forma expresa que procederá estrictamente en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos así como trata de personas." (el énfasis es añadido)

48. Finalmente, en la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Senadores el trece de diciembre de dos mil siete, algunos senadores puntualizaron lo siguiente:

"Se establecen figuras que vienen del derecho comparado, como la extinción del dominio. Porque no podemos seguir tolerando y permaneciendo impasibles los legisladores, cuando vemos que día con día se detienen a los

grandes capos de la droga; se van a prisión, pero mantienen su imperio económico intocable.

"Por eso proponemos, nuevamente **bajo control judicial**, la figura de la extinción del dominio, y realmente con la fuerza de la ley, desmembrar realmente estas bandas."[10]

49. En dichos procesos legislativos, el Constituyente Permanente introdujo en la Constitución la institución de la extinción de dominio como un "*régimen de excepción*", dentro de un paquete de reformas dirigidas a enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo; asimismo, se consideró como uno de los objetivos de dichas reformas, que los recursos obtenidos con el ejercicio de esas medidas, sirvieran para implementar un sistema de justicia restaurativa en favor de las víctimas y de los ofendidos.

50. Para cumplir con ello y dada su excepcionalidad, se estimó necesario que el ejercicio de la acción correspondiente, a cargo del Ministerio Público, se verificara en supuestos delimitados que, incluso, se introdujeron en la propia Norma Fundamental, para lo cual, se partió de la base de que el imperativo fue combatir a la delincuencia cuya capacidad de operación, organización y sofisticación de sus actividades, genera un impacto social por el tipo "***de los delitos que comete***" y, en general, aquel cuya condición de amenaza en contra del Estado, requiere de un tratamiento especializado.

51. Fue sobre esas bases que el legislador en el artículo 22 constitucional, al enunciar los casos en que procede la extinción de dominio, estableció un catálogo de delitos ciertos y bien especificados; asimismo, precisó los bienes sobre los que podría ejercerse tal acto privativo y el tipo de procedimiento a seguir.

52. Los delitos que dan lugar a la extinción de dominio son:

- Delincuencia organizada;

- Delitos contra la salud;

[10] C. Senador **********.

• Secuestro;

• Robo de vehículos; y,

• Trata de personas.

53. Los bienes sobre los que procede extinguir el dominio son:

• Los que sean instrumento, objeto o producto del delito.

• Los que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito.

• Los que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

• Los que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

54. Como se advierte, si bien la incorporación de la institución de extinción de dominio a nuestro sistema jurídico se enderezó a combatir un fenómeno que puede identificarse como "delincuencia organizada", lo definitivo es que no corresponde exclusivamente al delito de "delincuencia organizada", respecto del cual, en efecto, tiene competencia exclusiva para legislar el Congreso de la Unión. No, la extinción de dominio tiene lugar cuando se actualizan los supuestos descritos en la norma constitucional, en la que se contemplan cinco delitos, a saber: delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, a lo que debe atenderse para dilucidar si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta con facultades para legislar en esa materia.

55. Ciertamente, no es válido afirmar que la "extinción de dominio" constituye, como tal, una "materia" y que, por ende, deba atenderse a su literalidad para conocer si su regulación legislativa corresponde al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados o a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tal como lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 40/95, con el rubro: "FACULTADES EXPRESAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES

REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE ESTABLEZCAN LITERALMENTE EN LA CONSTITUCIÓN.",[11] en un asunto en el que analizó la facultad de que dispone la Asamblea para aprobar la Ley de Ingresos y en donde interpretó que, si bien es cierto que el régimen de competencias del Distrito Federal debe estar establecido en la Constitución, a diferencia del régimen de competencia local que es residual, lo cierto es que esa facultad no tiene que estar formulada de manera literal. Las consideraciones que sustentaron ese preciso punto de vista son:

- Para la interpretación de las normas constitucionales, en razón no sólo de su supremacía en el sistema jurídico, sino de sus contenidos, que tratan de dar respuesta a la realidad social, económica o política existente, el intérprete para desentrañar su significado, debe no sólo hacer uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado (gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino incluso buscar la finalidad que la norma persigue, en la perenne movilidad de la sociedad y la necesaria adecuación de sus instituciones. Por ello, se estimó conveniente acudir a la interpretación teleológica que permita irrumpir en su esencia.

- El régimen de facultades expresas que prevalece en el orden jurídico mexicano, **no puede llevarse al extremo de exigir que, en un solo precepto o con determinadas palabras, se establezcan las atribuciones de la autoridad, pues ello haría prevalecer un sistema de interpretación literal que no es idóneo por sí para la aplicación del derecho**; y que desarticularía el sistema establecido por el Poder Revisor de la Constitución, al asignar facultades a la Asamblea de Representantes con la coexistencia de las atribuciones del Congreso de la Unión y del referido órgano, para legislar en lo relativo al Distrito Federal.

- Las facultades de la Asamblea son el resultado de la evolución de ese órgano a partir de su creación en el año de mil novecientos ochenta y siete. Cuando inició sus tareas, la entonces Asamblea de Representantes tenía

---

[11] Publicada en la página ciento treinta y dos del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido: "El régimen de facultades expresas que prevalece en el orden constitucional mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en el artículo 122 de la Carta Fundamental se establezcan con determinadas palabras sacramentales las atribuciones de la autoridad, pues ello haría prevalecer un sistema de interpretación literal que no es idóneo por sí solo para la aplicación del derecho y que desarticularía el sistema establecido por el Poder Revisor de la Constitución, al asignar facultades a la Asamblea de Representantes con la coexistencia de las atribuciones del Congreso de la Unión y del referido órgano, para legislar en lo relativo al Distrito Federal. Por el contrario, es suficiente que de manera clara e inequívoca se establezcan dichas facultades."

un nivel jerárquico inferior al de los Congresos Locales del país, ya que si bien desde su creación ha constituido un órgano de representación ciudadana, en sus inicios sus facultades se limitaban a dictar bandos y ordenanzas, así como Reglamentos de Policía y Buen Gobierno, sobre lo cual se precisó que la Asamblea fue creada, apoyada en el principio de la representación, actuando como gestor de la población del Distrito Federal, tal como se advierte de las reformas al artículo 73 de la Constitución General de la República, publicada el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, en la que se establecieron las pautas para la reforma político-jurídica del Distrito Federal.

56. Luego, dado que no debe atenderse a la literalidad cuando se habla de "extinción de dominio", entonces, a fin de dilucidar a qué materia corresponde esa institución jurídica y, por ende, a qué órgano corresponde su regulación legal, debe tomarse como punto de referencia su naturaleza, misma que se encuentra en la materia penal, en la materia civil e incluso en la administrativa.

57. Sobre esto, la extinción de dominio es una institución híbrida, que conjuga elementos de cada una de las materias mencionadas, pero que tiene una finalidad distinta de la que se persigue en los juicios que corresponden a cada una de ellas.

58. Así, los procesos penales tienen por objeto *sancionar al responsable* por la comisión de un delito, mediante diversos tipos de penas, la principal, la pena privativa de libertad; mientras que la extinción de dominio no está interesada en determinar quién es el responsable en la comisión de los delitos, sino en privar a la delincuencia organizada de sus bienes, y aplicarlos en favor del Estado.

59. La extinción de dominio no se trata de una pena, es una institución independiente del proceso penal, pues mientras que éste se encarga de sancionar al sujeto que ha cometido el ilícito, **la extinción de dominio se encuentra desprovista de carácter punitivo**, no está supeditado a la demostración de la responsabilidad penal de una persona pudiendo ejercerse independientemente de un proceso penal.

60. No obstante lo anterior, es innegable que en los términos en que tal institución se encuentra regulada en nuestro orden jurídico, su origen está intrínsecamente vinculado con el derecho penal, en razón y medida de que está sujeta a la verificación de uno de los hechos ilícitos, descrito en los tipos penales que han quedado enunciados e, incluso, se puede ver afectado si, en aquel proceso criminal se resuelve la no acreditación del delito.

61. Por otra parte, si bien es cierto que la autonomía del proceso penal que le otorgó la Constitución a la acción de extinción de dominio, ha acercado su procedimiento a las reglas del proceso civil, no por ello puede afirmarse que se trata de una acción civil, en virtud de que el **derecho civil, como base del derecho privado, tiene por objeto regular intereses particulares, lo que no es materia de debate en el procedimiento de extinción de dominio** en donde el Estado pretende extinguir el dominio que un particular tiene sobre ciertos bienes, situación que lo dota de ciertos elementos administrativos.

62. Al respecto, aun cuando este Alto Tribunal ha establecido que los órganos del Estado pueden acudir al amparo cuando no actúan con el carácter de autoridad, sino que están colocados a un nivel de coordinación con los particulares, también lo es que aun cuando la extinción de propiedad derivada del ejercicio de la acción de extinción de dominio, deriva de una sentencia, la acción de extinción de dominio no es equiparable a una acción regulada por el derecho civil y, en ese sentido, debe afirmarse que: no por la circunstancia de que *el procedimiento* deba seguirse conforme a las reglas de los procedimientos civiles, la naturaleza de la acción se torna civil.

63. En efecto, la acción de extinción de dominio sólo la puede ejercer el Estado, no es accesible a los particulares. Su objeto tampoco persigue intereses particulares, sino que, por el contrario, persigue intereses de orden público. Lo que el Estado pretende mediante el ejercicio de la acción de extinción de dominio es extinguir el derecho de propiedad del titular afectado, para apropiarse de la titularidad del bien objeto de la acción, para cumplir con una finalidad de orden público: debilitar a la delincuencia organizada en sus recursos económicos, así como destinar el bien a usos de utilidad pública. Esos elementos se identifican con el ámbito administrativo, aunque respecto de éste, guarda importantes diferencias.

64. Ciertamente, el derecho administrativo tiene por objeto regular las relaciones entre el Estado, como entidad soberana, y los particulares. A ello obedece que sea en el marco del derecho administrativo que el Estado pueda expropiar con fines de utilidad pública y pueda sancionar a los particulares cuando incurran en el incumplimiento de sus deberes, ya sea mediante la imposición de multas, la clausura de establecimientos, la terminación de permisos o concesiones, o la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos, por mencionar sólo algunos ejemplos; sin embargo, **la extinción de dominio a cargo del Estado no se verifica *propria auctoritate***, antes bien, para su verificación, necesariamente debe ventilarse en un procedimiento jurisdiccional, en el que autoridad y gobernado intervienen en un plano de igualdad, y en el cual, deben respetarse las formalidades esenciales de todo procedimiento.

65. Por ello, se afirma que la extinción de dominio es una institución híbrida, que involucra elementos del derecho penal y del derecho civil, cuya legitimación para ejercer la acción se encuentra reservada al Estado, y cuya esencia está dirigida a ser una herramienta eficaz en el combate a la delincuencia.

66. Entonces, la extinción de dominio, si bien no constituye una materia específica ni corresponde en sus términos y de manera específica a alguna de las materias civil, penal o administrativa, sí **contiene** elementos que la identifican con aquéllas y, en consecuencia, es válido sostener que la competencia de la Asamblea Legislativa para el Distrito Federal para normar, está dada en lo dispuesto en la base primera, fracción V, inciso h), del artículo 122 constitucional, que la faculta para legislar en las materias civil y penal.

67. Así las cosas, una vez agotados los dos primeros pasos del test, corresponde verificar que se satisfaga el tercero de ellos, atinente a la **regularidad**, en el que debe analizarse si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ejerció la competencia que le correspondía, sin violentar la esfera de competencias que otros órganos o poderes del mismo ámbito tienen previsto para el ejercicio de sus funciones.

68. En relación con esto, según lo que hasta aquí se ha desarrollado, para efectos de las competencias y las facultades que otorga la Norma Fundamental al Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no hay una materia que se identifique como "*extinción de dominio*", antes bien, para dilucidar a quién corresponde legislar sobre esa institución, debe atenderse a su naturaleza que, como ya se dijo, está en los ámbitos penal, civil y administrativo, siendo en el primero de ellos donde encuentra su génesis, pues no puede pasarse por alto que, según las razones dadas por el legislador en la exposición de motivos que explica su incorporación al sistema jurídico mexicano, se trata de un régimen excepcional establecido para combatir a la delincuencia cuya capacidad de operación, organización y sofisticación de sus actividades genera un impacto social por el tipo "***de los delitos que comete***" (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas), y cuya condición constituye una amenaza en contra del Estado, de manera que es la existencia de esos delitos la que justifica el inicio de los procedimientos de extinción. Entonces, al tratarse de una figura ligada a la comisión de esos precisos ilícitos cuya persecución puede corresponder en ciertos casos al orden local y, en otros, al orden federal, es a la competencia para legislar en esos delitos a lo que hay que atender para conocer a quién corresponde la regulación legislativa de la extinción de dominio, al ser ésta una consecuencia de la comisión de aquéllos y, en virtud de la cual, el Estado solicita a un Juez que se apliquen

en su favor, bienes cuyo dominio se declare extinto en la sentencia y la víctima del delito puede obtener, efectivamente, la reparación del daño.

69. En términos del artículo 73 constitucional, corresponde al Congreso de la Unión legislar sobre cuatro de los delitos que pueden dar lugar a la extinción de dominio (delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y delitos contra la salud); sin embargo, esa circunstancia no lleva a sostener que su regulación es exclusivamente de competencia federal, por dos razones, primero, porque no se está en el supuesto de legislar en materia de delitos en el ámbito sustantivo; y, segundo, porque la competencia de la Asamblea tiene que ser vista en sus dos posibles vertientes, tanto la normativa como la operativa.

70. En cuanto a lo primero, si bien conforme al marco constitucional vigente, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia sustantiva de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y delitos contra la salud, lo definitivo es que la emisión de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal no corresponde a un ejercicio legislativo sobre dichas materias, si se toma en cuenta que lo que ahí se regula es el procedimiento que ha de seguirse para obtener la declaración de la extinción de un derecho real sobre los bienes que la propia Norma Constitucional describe y su adjudicación a favor del Estado.

71. Por lo que ve a lo segundo, la competencia de la Asamblea Legislativa puede darse tanto en una vertiente normativa, como en una operativa. En la normativa, se ubica la facultad de legislar sobre aspectos sustantivos, como es el caso del delito de robo de vehículos, en tanto que a la operativa corresponden los delitos que pueden ser concurrentemente perseguidos, juzgados y condenados, como lo son: narcomenudeo, trata de personas y secuestro.

72. Así, al resolver la acción de inconstitucionalidad **********, sesionada el veintiocho de junio de dos mil once, el Tribunal Pleno interpretó el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución General, en los términos siguientes: "Del proceso legislativo en cuestión, se advierte que el objetivo de la reforma constitucional que adicionó un párrafo al artículo 73, fracción XXI, constitucional, fue permitir que las autoridades locales participaran en la persecución de delitos previstos en las leyes generales, relativas a las materias concurrentes que prevé la Constitución.". Luego, se dijo, se trata de una habilitación para que las leyes generales establezcan los supuestos en los que las autoridades locales podrán perseguir los delitos en ellas tipificados, lo que implica que en este esquema corresponde a las leyes generales establecer los tipos penales y las hipótesis en que deberán ser perseguidos localmente, en

el entendido de que las normas procesales para su conocimiento y persecución, así como las normas sustantivas distintas al establecimiento del tipo, como por ejemplo, las relativas a conexidad o individualización de penas, seguirán siendo las expedidas por las entidades federativas.

73. En el caso, cuando se emitió la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, el esquema de distribución competencial de los delitos sobre los que trata o se aplica era distinto. Si bien la delincuencia organizada ya estaba federalizada desde el dieciocho de junio de dos mil ocho, ni el delito de trata de personas ni el de secuestro se habían convertido en concurrentes "operativamente", mediante la facultad constitucional de emitir leyes generales por el Congreso de la Unión; esto lo hizo el Congreso de la Unión tratándose del secuestro, mediante reforma publicada en el Diario Oficial «de la Federación» el cuatro de mayo de dos mil nueve; y el delito de trata de personas, el catorce de julio de dos mil once.

74. Es relevante mencionar que del contraste de los catálogos constitucional y el del artículo 4 de la ley local, únicamente el delito de delincuencia organizada queda fuera de la competencia de ese órgano legislativo local, sea normativa o sea operativa, del Distrito Federal.

75. Luego, en la medida en que el Distrito Federal tiene competencia para conocer de los delitos mencionados, **con excepción del delito de delincuencia organizada**, debe entenderse que también está facultado para legislar en lo relativo a la figura de extinción de dominio, que si bien es autónoma de los procesos penales respectivos, guarda relación con los mismos en tanto es su existencia la que justifica el inicio de los procedimientos de extinción e, inclusive, en el caso de que se dicte un fallo absolutorio por no acreditarse los elementos del cuerpo del delito, su conclusión; de ahí que deban desestimarse, por **infundados**, los motivos de agravio expresados en torno al tema de la incompetencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de extinción de dominio, pues de acuerdo con las consideraciones expresadas, **se concluye que dicho órgano legislativo sí cuenta con facultades para legislar en la materia de que se trata**.

76. Ahora, previamente al análisis de los conceptos de violación y dado que es el artículo 22 de la Norma Fundamental, el fundamento constitucional en que descansa la acción de mérito, es el caso de contestar la siguiente pregunta:

¿Cómo debe interpretarse el artículo 22 constitucional?

77. Los procesos legislativos que se han relacionado en párrafos anteriores, permiten observar que el Constituyente Permanente partió de dos premisas claramente identificables al incorporar a nuestro sistema jurídico la institución de la extinción de dominio.

78. Por un lado, manifestó que la extinción de dominio tiene por objeto introducir un *régimen de excepción* para combatir a la delincuencia organizada por la comisión de cinco delitos precisos (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas).

79. Por otra parte, consideró que dicho régimen de excepción debía *aplicarse en forma restrictiva* y, por tanto, no debía ser utilizado en forma arbitraria para afectar a personas, propietarios o poseedores de buena fe.

80. A continuación, se desarrollan ambas premisas:

81. **1) La extinción de dominio como figura de combate eficaz a la delincuencia organizada, por la comisión de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.**

82. Tal como se indicó, en los procesos legislativos consta que el Constituyente Permanente introdujo a la Constitución la extinción de dominio, como un "régimen de excepción", dentro de un paquete de reformas dirigidas a dar un *trato especial a cierto tipo de delincuencia*.

83. Tan es así, que en la misma reforma que incorporó al Texto Constitucional la figura de la extinción de dominio, se hicieron múltiples modificaciones al Texto Constitucional que englobaron un trato especial dirigido al combate efectivo a la *delincuencia organizada*.[12]

---

[12] "Artículo 16. … La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de **delincuencia organizada**, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
"…
"Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como **delincuencia organizada**. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. ..."
"Artículo 18. … Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar

84. En efecto, el Constituyente Permanente se refirió en forma reiterada a la necesidad de contar con *herramientas especiales*, para combatir un *tipo especial de delincuencia* que ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades, que se distingue por sus características especiales en su capacidad

---

su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de **delincuencia organizada** y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
"Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de **delincuencia organizada** se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por **delincuencia organizada** con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley."
"Artículo 19. … El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de **delincuencia organizada**, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
"…
"Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por **delincuencia organizada** el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro Juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. ..."
"Artículo 20. ...
"B. De los derechos de toda persona imputada:
"…
"**III**. A qué se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de **delincuencia organizada**, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
"La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de **delincuencia organizada**;
"...
"V. …
"En **delincuencia organizada**, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;
"...
"C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
"...
"V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o **delincuencia organizada**; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa."

de operación, la sofisticación de sus actividades, **el impacto social de los delitos que comete** y su condición de amenaza en contra del Estado. Fue en ese sentido que se identificaron cinco delitos específicos.

85. Asimismo, el Constituyente Permanente se manifestó en cuanto a que los procesos penales vigentes no son eficaces para afectar a la delincuencia organizada en su *patrimonio*. Lo cual es indispensable para debilitar su estructura, aumentar sus costos, reducir sus ganancias, dificultar su operación y afectarlo de manera frontal.

86. Señaló que, por regla general, los bienes que las bandas criminales utilizan para la comisión de los delitos no están a nombre de los procesados, y aun cuando sea evidente que se utilizan como instrumento para el delito o que son producto de las operaciones delictivas, debido a esa falta de relación directa con los procesados, el Estado no puede allegarse de ellos.

87. Por lo anterior, el Constituyente Permanente consideró necesario introducir la "extinción de dominio", como una figura jurídica novedosa, la cual no tuviera por objeto sancionar al responsable, sino que estuviera dirigida al apoderamiento de los bienes que son instrumento y producto del delito.

88. En conclusión, **la regulación de la figura de extinción de dominio tuvo por objeto** adecuar las estructuras constitucionales y legales para ***combatir en forma eficaz* a la delincuencia organizada**, por la comisión de cinco delitos precisos, al considerar que los mecanismos que existían con anterioridad eran insuficientes.[13]

2) Utilización restrictiva de la figura de extinción de dominio

89. Con la misma intensidad que el Constituyente Permanente enfatizó la especial naturaleza de la acción de extinción de dominio, los objetivos que persigue, así como su autonomía del proceso penal, también destacó que *dicha acción debe ejercitarse con absoluto respeto a la legalidad, a la garantía de audiencia y debido proceso*.

90. Manifestó que un modelo eficaz no puede estar sustentado de manera exclusiva en mayores facultades para las autoridades policiales sin

[13] Exposición de motivos presentada a la Cámara de Senadores por el Ejecutivo Federal el trece de marzo de dos mil siete.

control alguno; sino que, en todo caso, debe contar con los equilibrios propios e indispensables que exige la justicia y, en general, un Estado democrático de derecho.

91. Se señaló expresamente que la acción de extinción de dominio no puede proceder en contra de personas, propietarios o poseedores de buena fe, con el objeto de que no se incurra en arbitrariedades.

92. Se recalcó que **el objetivo es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, para debilitarla económicamente**. Que la acción de extinción de dominio se crea para combatir a la delincuencia organizada, para el tratamiento de un fenómeno muy particular de delincuencia que, por sus características especiales en la capacidad de operación de la organización, la sofisticación de sus actividades, el impacto social de los delitos que comete (delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas) y, en general, su condición de amenaza en contra del Estado, requiere de un tratamiento especializado; por lo que *no se pretende que sea aplicada indiscriminadamente, a otro tipo de conductas*.

93. El Constituyente destacó que: "*el régimen de delincuencia organizada se crea para el tratamiento de un fenómeno muy particular de delincuencia … que no debe utilizarse para facilitar las tareas del Ministerio Público en la persecución de delitos comunes*", sino sólo para combatir a las bandas delincuenciales que, debido a su nivel de organización, sofisticación y equipamiento, representan un riesgo para el Estado.

94. De manera que insistió en que el ejercicio de la acción de extinción de dominio no debe conculcar los derechos fundamentales de las personas tuteladas en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

95. Por tanto, partiendo de que el combate a la delincuencia organizada, dado el alto grado de sofisticación que ha alcanzado, requiere de medidas especiales, el Constituyente Permanente introdujo una figura que no está encaminada a determinar la culpabilidad del probable responsable y su sanción penal, sino, en esencia, el apoderamiento de los bienes de que se sirve para delinquir.

96. Dado que tal herramienta está dirigida a su patrimonio y no a la persona, el Constituyente Permanente estableció que no se requiere esperar a una sentencia que determine la culpabilidad penal del inculpado, sino que basta que se aporten al juicio "suficientes elementos" respecto de la existencia

del hecho ilícito que se adecua a la descripción normativa de los delitos a que alude el artículo 22 constitucional, y el involucramiento de los bienes, para que la acción proceda.

97. Esto es, el Constituyente admitió que la incorporación de dicha institución generaba "alguna restricción" a las garantías individuales.[14] Sin embargo, no debe pasar inadvertido que también aclaró que *dichas restricciones eran solamente aplicables a los miembros de la delincuencia organizada*, debido a la sofisticación de dichas organizaciones y la dificultad en su combate.

98. Fue claro en establecer que, por tratarse de un régimen de excepción, no debía utilizarse para perjudicar a personas de buena fe, para no incurrir en arbitrariedades, ni debía utilizarse para facilitar las tareas del Ministerio Público en la persecución de los delitos comunes.

99. Si bien el Constituyente Permanente señaló que el objetivo de la acción de extinción de dominio es que el Estado tenga una herramienta eficaz en contra de la delincuencia organizada, también estableció que esa herramienta no puede convertirse en un instrumento que justifique actuaciones arbitrarias del Estado, sino que en todo caso deben respetarse las *garantías mínimas* a favor de los gobernados, esto, al margen de que precisó que los recursos obtenidos tendrán como uno de sus objetivos principales, la implementación de una justicia restaurativa.

100. El análisis de las dos premisas en que se sustenta la acción de extinción de dominio, permite afirmar que el Constituyente Permanente buscó en todo momento un equilibrio entre el respeto a las garantías individuales, la seguridad pública y la justicia penal: de ahí que deba excluirse que la acción de extinción de dominio no tiene por objeto *anular* o vaciar de contenido las mencionadas garantías. Por tanto, la interpretación del artículo 22 constitucional, no debe hacerse al margen de aquéllas, sino que, por el contrario, debe complementarse con las mismas, en la medida en que no se impida su objetivo, sobre todo cuando pueden estar involucradas personas de buena fe.

101. Por lo anterior, atendiendo a los conceptos de violación de la parte quejosa, corresponde a esta Primera Sala determinar, primero, qué debe entenderse por la "acreditación del hecho ilícito", constitutivo de los delitos contra la salud, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y robo de

---

[14] Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales (párrafo 52).

vehículos, en segundo lugar, cuáles son los alcances de la autonomía entre el proceso penal y el de extinción y, finalmente, resolver si la interpretación que realizó el tribunal de apelación en torno a las cargas probatorias que se desprenden del artículo 22 constitucional, es correcta.

102. La fracción II del artículo 22 de la Constitución Federal dispone que la acción de extinción de dominio procede en los casos siguientes:

"II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

"a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

"b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

"c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

"d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño."

103. De dicha fracción se obtienen estas premisas:

1) La acción de extinción de dominio sólo procede respecto de bienes que han sido *instrumento, objeto o producto* de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.[15]

[15] **Cabe precisar que la fracción II del artículo 22 constitucional enumera y ejemplifica en sus diversos incisos varias hipótesis de *uso* de los bienes, tales como "*que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito*" o "*que hayan sido uti-***

2) Al ejercer su acción, el Estado debe aportar al juicio de extinción de dominio "elementos suficientes" para acreditar, en *primer lugar*, que tuvieron lugar los ***hechos ilícitos*** que se adecúan a la descripción normativa de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; en *segundo lugar*, que los bienes objeto del juicio fueron *instrumento, objeto o producto* de los delitos citados; y en *tercer lugar*, en el supuesto de que los bienes se hayan utilizado para la comisión de delitos por parte de un tercero, aportar datos que razonablemente permitan sostener **que ello se haya dado con conocimiento del propietario de los bienes**, hipótesis que se desarrollará con mayor detenimiento al abordar las cargas probatorias relativas al "tercero de buena fe".

104. A continuación se explicarán los elementos sustanciales de dichas proposiciones:

(a) Hecho ilícito

105. Según el *Diccionario esencial de la Lengua Española* "*hecho*" es una acción u obra. Es la cosa que sucede.[16]

***lizados para la comisión de delitos*". Para evitar repeticiones innecesarias**, las referencias que se hagan en el presente estudio a los bienes como "instrumento" del delito, se entenderá que engloban las diferentes hipótesis a que se refieren todos los incisos de la fracción II citada.

[16] "**Hecho, cha**. Part. Irreg. De hacer. II. I. ADJ. 1. Acabado, maduro. *Hombre, árbol, vino hecho*. II 2. Semejante (II que semeja). *Hecho un león*, *un basilisco*. *Hecha una fiera*. 3. Dicho de una persona: constituida (II compuesta). *Personas mal hechas*. II. II. M. 4. Acción u obra. II 5. Cosa que sucede. II 6. Asunto o materia de que se trata. II hecho. INTERJ. Se usa para expresar asentimiento o conformidad. ¿*Vienes mañana a cenar*? –Hecho. II –consumado. M. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. II hecho de armas. M. Hazaña o acción señalada en la guerra. II hecho imponible. M Der. Situación o circunstancia que origina la obligación legal de contribuir y sobre la que se aplica el tributo. II –jurídico. M. Der. El que tiene consecuencias jurídicas. II –probado. M. Der. El que como tal se declara en las sentencias. Hechos de los Apóstoles. M. pl. Quinto libro del Nuevo Testamento, escrito por san Lucas. II a hecho. LOC. ADV. En conjunto, sin distinción ni diferencia. *Corta de árboles por entresaca o a hecho*. II de hecho. I. LOC. ADV. 1. Real y verdaderamente. *De hecho las venas no laten*. II 2. De veras, con eficacia y buena voluntad. *Esta ley tiene de hecho una aplicación menor*. II. II. LOC. ADJ. 3. Que no se ajusta a una norma o prescripción legal previa. *Situación de hecho*. U. t.c. loc.adv. *No esperaremos una resolución, procederemos de hecho*. II de hecho y de derecho. LOC. ADJ. Que, además de existir o proceder, existe o procede legítimamente. *Era grande de España de hecho y de derecho*. II eso está –EXPR. Coloq. Se usa para indicar que algo se puede considerar tan seguro como si ya se hubiera realizado. II –y derecho, cha. LOC. ADJ. 1. Dicho de una persona: Cabal, excelente. II 2. Dicho de una cosa: ejecutada totalmente. II ya está hecho. EXPR. Se usa para manifestar conformidad con algo ya irremediable. V. frase –ropa–."(***Diccionario esencial de la Lengua Española*, de la Real Academia Española, página 763)**

106. En el campo del derecho –*hecho jurídico*–, es la actividad o acontecimiento que produce un resultado con consecuencias jurídicas, puede ser lícito o ilícito.

107. Lícito, lo que no es contrario a los postulados normativos. Ilícito es lo prohibido legalmente.[17] La esencia real de lo ilícito es la lesión de los intereses jurídicamente protegidos.

108. Don **********, en su obra *Diccionario de Derecho Penal*, lo define de la siguiente manera:

"**Hecho.** Si bien en sentido lato por 'hecho' se entiende al delito en el conjunto de sus elementos objetivos y subjetivos, es pertinente hacer la distinción entre el hecho, como delito, del hecho como una parte de él, empleado este último término como sinónimo de acto, acción o conducta, criterio por demás aceptado en forma general por los autores de la materia. En efecto, recordemos que Cavallo expresó que el término hecho tiene un significado amplio, comprensivo de todos los elementos que realizan el tipo penal, y el técnico o restringido que se refiere a los elementos materiales del tipo (consúltense **********, parte generale, VII, págs. 136-137, Napole, 1955, y **********, vol. I, pág. 170, **********). Desde un punto de vista lógico, antes de un resultado concreto se da un proceder humano, sea éste positivo o negativo, al cual se suma, en algunos casos, un resultado causal configurativo del hecho mismo que al adecuarse a la hipótesis legal, resulta típico, Por ello en un orden de prelación lógica primero se da la conducta o el hecho y después su tipicidad, para a continuación calificar la conducta o hechos típicos mediante una valoración tanto objetiva como subjetiva (antijurídica y culpable), para, por último integrar la noción del delito mediante la concurrencia de la punibilidad. Es pues importante la terminología a emplearse para denominar al primer elemento del delito en el orden de prelación lógica de los mismos. Unos le denominan acción, término genérico comprensivo de la acción en sentido estricto y de la omisión; otros autores prefieren hablar de conducta y dentro de ésta examinan la acción y la omisión, así como el resultado; otros más emplean el término hecho y, en fin, otros una doble terminología, según las exigencias típicas: conducta o hecho, ya sea que la norma describa un mero comportamiento o bien agregue, en la descripción típica, un resultado material concreto. Jiménez de Asúa prefiere la

[17] "**Ilícito, ta**. I. ADJ. 1. No permitido legal o moralmente. II II. M. 2. Méx. Delito (II culpa, quebrantamiento de la ley). V. acto –causa–."(***Diccionario esencial de la Lengua Española*, Real Academia Española, página 802)**

expresión acto, al considerar inaceptable e inconveniente hablar del hecho, por resultarle este término demasiado genérico, pues con él, como ya lo había señalado Binding, se designa todo acontecimiento, nazca de la mano de la mente del hombre o acaezca por caso fortuito, mientras que por 'acción' se entiende la voluntad jurídicamente significativa; igualmente el propio autor rechaza el vocablo conducta, al considerar que se refiere 'a una actuación más continuada y sostenida que la de mero 'acto psicológico' que … es el punto de partida para el juicio de reproche en que consiste la culpabilidad (*Tratado de Derecho Penal,* vol. III, págs. 331-334, Editorial Losada, Buenos Aires, 1976). Como es fácil advertir, cada autor prefiere usa, con relación al primer elemento objetivo del delito, el vocablo que pretende ser más adecuado a la sistemática previamente aceptada. Convencidos de que los términos empleados resultan, en general demasiado amplios o estrechos para el concepto que en ellos se trata de comprender, preferimos hablar de hecho, denominación genérica del comportamiento humano trascendente en el plan normativo, admitiendo que en ocasiones resulta correcto calificarlo de conducta, con expresa referencia a aquellos delitos en los cuales no existe, en función del tipo penal, la producción de un evento o un resultado material. Sobre este particular recordemos que ********** estima que los términos adecuados son conducta o hecho, según la hipótesis que se presenta en el caso particular (*Apuntamientos de la parte general de Derecho Penal*, vol. I, pág. 287, Editorial Jurídica Mexicana, México, 1969). El propio ********** hace hincapié en que, si el elemento objetivo del delito puede estar constituido por una mera conducta o un hecho, hipótesis ésta en la que se está en presencia de un delito material o de resultado, los términos adecuados son 'conducta' o 'hecho', según la hipótesis que se presente, pero ello no debe llevar forzosamente a precisar que se puede adoptar uno solo de dichos términos, pues si se aceptara el término 'conducta', éste resultaría estrecho, pareciendo inapropiado su uso para los casos en que se estuviera en presencia de un resultado material consecuencia de la conducta; en tanto si se admitiera el término 'hecho' tal expresión resultaría excesiva al comprender, además de la conducta, el resultado (*Apuntamientos de la parte general de Derecho Penal*, vol. I, pág. 293). Aclarado que el primer elemento objetivo del delito puede denominarse 'conducta' o 'hecho' según la hipótesis de que se trate en función del tipo penal, por hecho debemos entender aquella actividad o inactividad voluntarias que producen un resultado material como su efecto causal, resultando sus elementos: a) conducta; b) resultado y c) nexo de casualidad entre la primera y el segundo." (páginas 547 y 548)

109. Bien, el contenido del artículo 22 constitucional, resultado de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, alude a la acreditación del

"***hecho ilícito***", acepción que también es empleada en la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y cuya existencia se configura como base central de la acción. La definición de este elemento es trascendental y tiene vinculación directa con el tema de la **autonomía**, que se entiende **relativa**, entre la persecución del delito y la acción de extinción de dominio.

110. El concepto de hecho ilícito a que se refiere la extinción de dominio, en términos normativos, no está disociado del origen eminentemente penal de la conducta delictiva que le da origen.

111. Al respecto, en lo que ve a la extinción de dominio en el Distrito Federal, la Ley de Extinción de Dominio para esa entidad en su artículo 2, fracción VIII, originalmente definía el hecho ilícito como:

"**Hecho ilícito:** Hecho, típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención."

112. Con motivo de la reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecinueve de abril de dos mil doce, se le atribuyó el concepto siguiente:

"**Hecho ilícito:** Hecho típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención."

113. Finalmente, la reforma de siete de mayo de dos mil catorce dio lugar a que dicha definición quedara en los términos siguientes:

"**Hecho ilícito:** Hecho típico y antijurídico, constitutivo de cualquiera de los delitos de secuestro, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, robo de vehículos y trata de personas; aun cuando no se haya determinado quien o quienes fueron sus autores, participaron en él o el grado de su intervención."

114. Así, la referencia al hecho ilícito está asignada a un hecho que encuadra en alguno de los tipos penales que establece la Constitución Federal (típico), y que es contrario a derecho (antijurídico).

115. Lo que permite advertir la relación sustancial entre el derecho penal y la acción de extinción de dominio, de manera que ésta, por disposición constitucional, tiene su origen en la comisión de una conducta tipificada como delito por la ley penal y que, en el caso del Distrito Federal, se refiere exclusivamente a delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, es decir, se excluye a la delincuencia organizada, por ser ésta de la competencia federal.

116. Además, esta referencia al vocablo hecho, relativo al considerado como delito por la ley penal, tiene un empleo común en las normas constitucionales y adjetivas que regulan nuestro sistema procesal penal, tal como se advierte en los artículos 16 y 19 constitucionales, en los que se hace referencia expresa al hecho ilícito.[18] De manera que el concepto de cuerpo del delito, utilizado en el sistema procesal penal tradicional mixto, ahora es denominado hecho ilícito, para referirse a la acción y omisión consideradas como delito por la ley penal.

117. Así lo ha explicado esta Primera Sala en la jurisprudencia cuyo rubro es: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS."[19]

---

[18] "**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. … No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un **hecho que la ley señale como delito**, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ..." "**Artículo 19.** Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un **hecho que la ley señale como delito** y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ..."

[19] Tesis 1a./J. 143/2011 (9a.), consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Primera Sala, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, cuyo texto es: "Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso –fase preparatoria para el dictado de la sentencia– el Juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de

118. Por tanto, ante esta evidente vinculación que tiene la acción de extinción de dominio con la persecución del delito en términos de las leyes penales, ambos procesos tienen una **autonomía relativa**, pues es innegable que en lo que ve a las calificaciones del hecho ilícito (desvinculado de la responsabilidad del inculpado), ambos juzgadores (civil y penal) deben partir de existencia del hecho ilícito, esto es, la acreditación de los elementos objetivos o materiales y normativos que configuran la descripción típica, considerada como delito por la ley penal y, por ende, contraria a derecho, tal como se analizará en el siguiente apartado:

(b) Autonomía relativa entre el juicio de extinción de dominio y la causa penal

119. El artículo 22 constitucional, en su párrafo segundo, fracción I, dispone:

"**Artículo 22.** …

"No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. **En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas**:

---

sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación –que sólo puede darse en sentencia definitiva– implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto, la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba."

"**I.** Será jurisdiccional y **autónomo** del de materia penal."

120. Como se ve, el artículo constitucional es contundente en disponer que el proceso de extinción de dominio es jurisdiccional y **autónomo** del proceso penal; en tal virtud, la cuestión a dilucidar no es si existe o no tal autonomía, sino determinar cuáles son sus alcances, esto es, si existe una desvinculación **absoluta** entre ambos juicios o si ésta es **relativa**.

121. En el caso, la autonomía a que se refiere el artículo 22 constitucional, debe entenderse como la independencia de aquel que juzga sobre el tema de la extinción de dominio sobre ciertos bienes por la comisión de uno de los delitos a que se refiere la propia norma constitucional y del que ha de emitir decisión en cuanto a la responsabilidad de quien se encuentra sujeto al juicio penal. Esa autonomía involucra independencia en la normatividad que cada uno de ellos ha de aplicar en el proceso del que es rector, independencia en el desarrollo de cada uno de los juicios e independencia en la decisión que adopten sobre temas respecto de los cuales no compartan jurisdicción (básicamente, la responsabilidad penal, por no ser éste un tópico sobre el que ambos Jueces deban decidir); sin embargo, tal separación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total, de manera que, por regla general, el Juez de extinción de dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el Juez especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución *intra* procesal que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva, que el delito no se demostró.

122. Al respecto, se parte de la base de que, desde su génesis, ambos procesos tienen como denominador común los hechos que dieron origen a una averiguación previa que, una vez escindida, da lugar a dos tipos de juicio: el *penal* (encaminado a la sanción por la comisión de delitos) y el de *extinción de dominio* (enderezado a declarar derechos patrimoniales), situación que impide afirmar la existencia de una autonomía absoluta, pues el propio artículo 22 constitucional sujeta a ambos procedimientos entre sí.

123. En efecto, la disposición de que se trata prevé que la extinción de dominio procede respecto de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, "*aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió*". La redacción del artículo permite afirmar válidamente que el legislador partió de la base de que paralelamente al ejercicio de la acción penal, se ejercería la acción de extinción de dominio; de ahí que, en primer orden, el Estado (a través del Ministerio Público) habría de llevar a cabo

las investigaciones para la persecución del delito, e incluso, en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal, de contar con los elementos necesarios para ello, pues solamente así se explica la aclaración, en el sentido de que la extinción de dominio procede "*aun cuando no se haya dictado*[20] (en el proceso penal) *la sentencia que determine la responsabilidad penal*", lo que supone que ha habido al menos una calificación a cargo de la autoridad judicial penal sobre la existencia de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional, como presupuesto para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, calificación que pudo obedecer a la petición de girar una orden de aprehensión, en términos del artículo 16 constitucional,[21] al dictado del auto de formal prisión o a uno de sujeción a proceso, y en virtud de lo cual debiera tramitarse un juicio en la vía penal y, en su momento, resolverse por el Juez competente.

124. En esas circunstancias, por regla general, **la acción de extinción de dominio está sujeta a que el Juez de la causa penal haya emitido alguna decisión (en orden de aprehensión o comparecencia, auto de formal prisión o de sujeción a proceso) en la que afirme que los hechos consignados por el Ministerio Público acreditan el cuerpo del delito de alguno de los ilícitos previstos en el artículo 22 constitucional**, a fin de dar seguridad jurídica desde el inicio del juicio de extinción de dominio.

125. Al respecto, no queda inadvertido que una decisión judicial de esa naturaleza está sujeta a que exista una consignación ante el Juez penal, lo que supone que se conoce de la existencia de algún sujeto a quien se le imputa la comisión del delito; sin embargo, con el conocimiento de que existen casos en los que el Ministerio Público se encuentra imposibilitado para ejercer la acción penal porque, a pesar de haber localizado bienes que, por ejemplo, se emplean como instrumento u objeto del delito, e inclusive, que son producto de aquél, se desconoce la identidad del probable responsable de su comisión, supuesto en el cual no sería posible ejercer la acción penal ni, por ende, obtener una resolución judicial en la que se califique si los hechos consignados

---

[20] Una inferencia de tal aclaración llevaría necesariamente a afirmar que la sentencia penal habrá de dictarse en algún momento.

[21] "**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. … **No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión**. …"

constituyen o no uno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional. En esas circunstancias, debe admitirse que tales casos constituyen una excepción a la regla y que, entonces, ante la falta de calificación del delito a cargo del Juez de la causa penal, corresponde al Juez de extinción de dominio, a partir de los elementos aportados por el Ministerio Público, resolver si con ellos se demuestra la comisión del hecho ilícito, en cuyo caso, el estándar de prueba se torna de mayor rigor para la representación social, aspecto que corresponderá al Juez de extinción de dominio determinar en cada caso.

126. La excepción mencionada tiene lugar porque, lo que carece de relevancia en el juicio de extinción de dominio, es la decisión que el juzgador penal adopte sobre la probable responsabilidad penal del inculpado o su culpabilidad en sentencia definitiva, pues tal responsabilidad no constituye uno de los elementos necesarios para declarar extinto el dominio del propietario; sin embargo, lo que necesariamente trasciende es la no comprobación del hecho ilícito.

127. En ese tenor, es evidente que el Juez de extinción de dominio se encuentra facultado para requerir oficiosamente, antes de resolver en definitiva, al Juez ante quien se siga la causa penal, las constancias del juicio, a fin de estar en posibilidad de resolver de manera congruente con la de su homólogo penal, en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito que haya dado lugar al ejercicio de la acción de extinción de dominio, si acaso aquél ha dictado una resolución de naturaleza *intra procesal* en donde haya decretado la no acreditación del cuerpo del delito, o bien la no demostración del delito, tratándose de sentencia definitiva.

128. Por lo anterior, debe concluirse que existe una vinculación entre uno y otro juicio en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito, de manera que, aun en el supuesto de que el juicio de extinción de dominio haya iniciado con aplicación de la excepción mencionada (es decir, sin una decisión a cargo del Juez de la causa penal), en caso de que durante el trámite del juicio de extinción de dominio haya habido alguna consignación al Juez penal a cargo del Ministerio Público por los hechos que dieron lugar a la extinción de dominio y que, por ende, el Juez de ese proceso penal llegue a emitir alguna decisión sobre la no acreditación del hecho ilícito, deberá retomarse la regla general y, entonces, su decisión impactará en la actuación del Juez de extinción de dominio, si acaso éste hubiese resuelto que sí estaba probado ese aspecto.

129. Lo anterior es congruente en lo que al tema de la autonomía entre ambos procesos se refiere, pues tal separación deriva, precisamente, de la responsabilidad del sujeto activo, ya que la institución de la extinción de domi-

nio se diseñó no para que el Estado aplique una sanción individualizada a un sujeto concreto por haber observado una conducta antijurídica prevista en la ley penal, sino para extinguir el dominio de los bienes que enseguida se describen:

a) Los que son instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal del sujeto a quien se le reprocha su comisión, **pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió**.

b) Los que, sin ser instrumento, objeto o producto del delito, hayan sido utilizados o destinados para ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Los que se estén utilizando para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño conoce esa circunstancia y no la notifica a la autoridad, o hace algo para impedirlo.

d) Los intitulados a nombre de terceros, pero que existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

130. Entonces, ante la distinción apuntada relativa a que en el proceso penal se juzga si el sujeto a quien se le atribuye una determinada conducta o hecho catalogado como delito por la ley, es responsable de haberlo cometido, en tanto que en el procedimiento de extinción de dominio se resuelve sobre la extinción de la propiedad de aquellos bienes que se han descrito, debe concluirse que en el juicio mencionado en último lugar, es intranscendente que se demuestre –o no– la responsabilidad del sujeto activo.

131. Lo que se quiere explicar, es que la base del procedimiento de extinción de dominio, ciertamente se edifica en la existencia del hecho ilícito, empero, su constatación es a título descriptivo y despersonalizado, esto es, la constatación del hecho ilícito en la extinción de dominio requiere la demostración de que ocurrió un evento histórico que se adecua a la descripción de alguno de los delitos previstos en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, de conformidad con el artículo 22 constitucional, y debiéndose dejar de lado el análisis a título personal de la conducta y culpabilidad como atributos de responsabilidad específica de quien lo haya cometido, en ese sentido, es factible dejar de analizar causas de justificación o excluyentes de delito a título personal, ya que para eso está el procedimiento penal.

132. Por eso, la acción de extinción de dominio procede aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal del sujeto a quien se le reprocha su comisión, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió –como lo señala el artículo 22, fracción II, inciso a), parte *in fine*, de la Constitución Federal–. De ahí la necesidad de que, por regla general, la acción de extinción de dominio esté sujeta a que el Juez de la causa penal haya emitido alguna decisión (en orden de aprehensión o comparecencia, auto de formal prisión o sujeción a proceso) en la que afirme que los hechos consignados por el Ministerio Público acrediten la materialidad de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional (secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el caso de la legislación del Distrito Federal), a fin de dar seguridad jurídica desde el inicio del juicio de extinción de dominio.

133. Una vez precisado lo que debe entenderse por "hecho ilícito", y cuáles son los alcances de la autonomía prescrita en el artículo 22 constitucional, y sobre la base de que corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, aportar los "elementos suficientes para determinar" la existencia del "hecho ilícito" –entendido como el hecho catalogado en la norma penal como delito de los descritos en el artículo 22 constitucional, y en el caso de la legislación del Distrito Federal secuestro, robo de vehículos, trata de personas y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo–, así como, la vinculación de los bienes con el ilícito, es necesario conocer cómo debe operar ese imperativo cuando los bienes que fueron instrumento, objeto o producto del delito, o que han sido utilizados de alguna manera en la comisión de los delitos especificados en el párrafo anterior, son propiedad de un tercero y cuáles son los mecanismos adoptados por el legislador para respetar sus garantías.

(c) El tercero afectado de buena fe

134. En el juicio de extinción de dominio cobra especial relevancia el afectado de buena fe, ante el riesgo de que, un mal entendimiento de la norma, pueda ser privado de sus bienes sin haberse seguido en su contra un juicio en el que se le respeten plenamente las formalidades esenciales del procedimiento.

135. Si bien la doctrina ha sostenido que la acción de extinción de dominio es una acción real, debido a que persigue a los bienes y no a las personas. No debe pasarse por alto que los bienes no tienen derechos, y que a quien se priva de los bienes es a una persona, lo cual adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que el afectado sea de buena fe.

136. Precisamente, porque existe la posibilidad de que el afectado o propietario de los bienes sea de buena fe, y que tanto del Texto Constitucional como de los procesos legislativos se desprende que la acción de extinción de dominio debe ejercitarse con absoluto respeto de las personas de buena fe, el artículo 22 constitucional, debe interpretarse con apego a las garantías constitucionales del posible afectado de buena fe, y no privarlo de la posibilidad de defenderse, porque, en dicho caso, ni se cumpliría con la finalidad de la figura, ni con la intención del Constituyente Permanente, según se demostrará más adelante.

137. Debe tenerse como "*afectado de buena fe*", al propietario o quien tenga algún derecho real sobre los bienes que sea afectado por una sentencia de extinción de dominio, acredite la legítima procedencia del bien, y respecto de quien no existan evidencias de que haya participado o haya tenido conocimiento de la actividad delictiva. Para dichos efectos, es "*afectado de buena fe o tercero afectado*", el propietario de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, con las características antes apuntadas, quien debe ser llamado al juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento (emplazamiento, ofrecimiento de pruebas, formulación de alegatos y el dictado de una sentencia) para deducir sus derechos, los que se encuentran tutelados a partir del establecimiento y distribución de las cargas probatorias que operan en el juicio de extinción de dominio y que más adelante se explicarán.

(d) Principio de presunción de inocencia

138. No pasa inadvertido para esta Sala, que el quejoso, además de apoyar sus argumentos relacionados con la carga de la prueba en el principio de "presunción de buena fe", también se refirió a la aplicación del "principio de presunción de inocencia", al juicio de extinción de dominio; sin embargo, éste no es aplicable al mismo.

139. Para respaldar tal conclusión, se transcribe el contenido, en lo conducente, del artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"**Artículo 20.** …

"B. De los derechos de toda persona imputada:

"I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa."

140. Dicho precepto alude al principio de presunción de inocencia, el cual puede significarse como el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente, en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad.[22]

141. El citado principio reposa en la necesidad de garantizarle al imputado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente; su finalidad es brindarle seguridad jurídica de que si no se demuestra su culpabilidad, no debe dictársele una sentencia condenatoria.

142. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Primera Sala, ya se ha pronunciado en el sentido de que el principio de presunción de inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva y ha establecido que el citado principio pertenece al ámbito del derecho penal, porque está vinculado con la "responsabilidad penal" del inculpado en la comisión del delito.

143. La Sala ha hecho extensiva la aplicación del mencionado principio al derecho administrativo sancionador sólo en cierta medida, pues ha determinado que "su traslado al ámbito administrativo sancionador debe realizarse con las modulaciones que sean necesarias para hacer compatible este derecho con el contexto institucional al que se pretende aplicar",[23] en tanto que existen importantes diferencias entre un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador.

144. Ha sostenido, además, que el principio de presunción de inocencia es inherente al derecho penal, porque está encaminado a evitar que se sancione al probable responsable en su persona hasta en tanto se acredite plenamente su culpabilidad.

---

[22] **Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)**
"**Artículo 8**. Garantías judiciales
"…
"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. …"
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
"**Artículo 14**
"…
"2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. …"

[23] Amparo en revisión **********, resuelto en sesión de once de noviembre de dos mil once.

145. Situación que también puede presentarse en el procedimiento administrativo sancionador, en cuanto a que también se pueden imponer sanciones –por ejemplo, destitución e inhabilitación del servidor público–.

146. Sin embargo, dicho principio no es aplicable al procedimiento de extinción de dominio, por la sencilla razón de que, en el tema de la responsabilidad penal del sujeto activo, es autónomo de la materia penal, cuenta habida que en aquél no se formula imputación al demandado por la comisión de un delito.

147. Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo **********, el veinticinco de enero de dos mil once, consideró que el principio de presunción de inocencia no es aplicable al juicio de extinción de dominio.

148. En efecto, si bien la acción de extinción de dominio tiene su origen en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, también lo es que su objeto –como se ha repetido con insistencia– no es sancionar penalmente al responsable en la comisión de dichos antisociales, sino resolver sobre la vinculación existente entre un determinado bien relacionado con actividades de un tipo especial de crimen, con un hecho ilícito de las características anteriores, en todo caso, sin prejuzgar sobre la culpabilidad del autor o partícipe del mismo.

149. No obstante lo anterior, el hecho de que el principio de presunción de inocencia no se considere extensivo al juicio de extinción de dominio –al no tener por objeto juzgar penalmente a los responsables de la comisión de los delitos–, no significa soslayar el respeto a la dignidad humana del demandado y el trato procesal imparcial, traducido en la satisfacción de su garantía de defensa adecuada en relación con su patrimonio, ni puede traducirse en posicionar de facto al posible afectado, en una condición tal, que sea él a quien corresponda demostrar la improcedencia de la acción, pues para tal efecto, se parte de la presunción de buena fe, a partir de la cual se activa la dinámica del *onus probandi*, y se distribuye la carga probatoria que corresponde a cada una de las partes.

150. Lo anterior así fue reconocido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo **********,[24] en el cual se argumentó:

[24] Resuelto en sesión de veinticinco de enero de dos mil doce, por mayoría de cuatro votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez

"Es así que, conforme al transcrito artículo,[25] se impone al afectado la carga de probar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita, **lo que significa que corresponde al actor o Gobierno del Distrito Federal, a través del Ministerio Público, acreditar** tanto que se utilizó el bien para cometer delitos de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos, **como que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia**, lo que además implica que el afectado tiene la carga de desvirtuar las presunciones e indicios que deriven en su contra y aportar elementos de prueba idóneos para demostrar que tuvo una actuación de buena fe y que estaba impedido para conocer la utilización ilícita del bien materia de la extinción de dominio, lo cual aunque tenga la apariencia de un hecho negativo, como elemento de la excepción del demandado es materia de prueba, porque es una negativa que deriva de hechos o elementos positivos, lo que supone que pesa sobre el afectado la carga de aportar elementos de prueba de los cuales deriven datos o inferencias de que conforme al sentido ordinario de las cosas, no tuvo la posibilidad física o jurídica de conocer la utilización ilícita del bien de su propiedad; mientras que al actor corresponde aportar, además, pruebas que desvirtúen la buena fe del dueño.

"Aunado a lo anterior, debe también destacarse que en la iniciativa presidencial de la reforma constitucional se señaló que la nueva norma de extinción de dominio debía establecer expresamente que no debe proceder la aplicación a favor del Estado de los bienes propiedad o poseídos por personas de buena fe, con el objeto de no incurrir en arbitrariedades, por lo que el procedimiento y resolución sólo tiene que realizarlo la autoridad judicial, lo que concatenado con el artículo 14, párrafo segundo, constitucional, debe implicar un procedimiento en donde se respete la garantía de audiencia."

151. De la transcripción antes hecha, se advierte que este Alto Tribunal determinó que el actor tiene la carga de acreditar no sólo la realización del hecho ilícito y el involucramiento de los bienes en la comisión de los delitos, sino también el conocimiento, por parte del afectado, con el objeto de desvirtuar su buena fe, de manera que la carga probatoria para el afectado consistiría en aportar las pruebas idóneas para, a su vez, desvirtuar los elementos positivos aportados por la actora.

152. En consecuencia, en su carácter de órgano protector del orden constitucional, este Alto Tribunal estima que si al juicio de extinción de domi-

---

Cordero de García Villegas y presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular.

[25] Artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.

nio no le son aplicables los principios del derecho penal por considerarse de naturaleza distinta, no por ello está exento de que se respeten las garantías mínimas previas al acto de privación de su propiedad, como podrían ser las garantías de los procedimientos civiles, incluyendo a la *presunción de buena fe*, que es un principio general del derecho que está implícito en la Constitución Federal, a fin de no dejar en estado de indefensión al posible afectado, ya que sólo teniendo la oportunidad de *desvirtuar* los hechos concretos que se le imputen, podrá demostrar su buena fe.

153. Ciertamente, conforme a la interpretación realizada del artículo 22 de la Constitución Federal, en la presente ejecutoria, para que *el juicio de extinción de dominio sea eficaz y no vulnere las garantías constitucionales* de los gobernados, debe cumplir con los requisitos siguientes:

A. En respeto a la garantía de seguridad jurídica, es aplicable *exclusivamente* a los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; y,

B. En respeto a las garantías de audiencia y de seguridad jurídica, en todo caso, la parte actora –el Estado, a través del Ministerio Público– debe aportar *suficientes elementos objetivos de prueba* para acreditar:

(a) Que sucedió el *hecho descrito en los tipos penales* de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas, *contenidos en la legislación penal que sea aplicable* para juzgar la comisión de dichos delitos;[26]

(b) Que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos citados en el inciso anterior, o que han sido usados para ocultar o mezclar bienes producto del delito; y,

(c) Asimismo, en el caso de que la acción se ejerza por actualizarse el supuesto descrito en la última fracción, esto es, que los bienes están siendo usados por un tercero, el Ministerio Público debe aportar los datos que razonablemente permitan considerar que el dueño tuvo conocimiento de ello.

154. Lo anterior, con la finalidad de que la parte actora aporte datos o elementos positivos encaminados a demostrar la mala fe del afectado, y que, de esa manera, se le pueda permitir a éste defenderse, *desvirtuando* dichos

[26] Cabe destacar que la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal no prevé el delito de delincuencia organizada.

elementos positivos exhibidos o aportados por la actora. Es momento, entonces, de examinar cómo opera la dinámica probatoria en el juicio de extinción de dominio y, específicamente, en el caso, en quien se ostenta tercero afectado de buena fe, comparte la copropiedad del bien cuyo dominio se pretende extinguir, con uno de los indiciados (por la comisión de alguno de los ilícitos a que se refiere el artículo 22 constitucional).

(e) Cargas probatorias

155. La fracción II del artículo 22 constitucional[27] contiene cuatro incisos, a saber: el inciso **a)** regula la premisa general, esto es, establece que procede la acción de extinción de dominio respecto de bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto del delito; por su parte, el inciso **b)** se refiere a casos en los que los bienes son utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; el inciso **c)** corresponde al caso en que los bienes estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y, finalmente, el inciso **d)** regula el caso de los bienes que estando intitulados a nombre de terceros, existan elementos suficientes para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por esos delitos se comporte como dueño.

156. En lo así relacionado, se deduce que los elementos a demostrar son diferentes en cada caso, según la causa que origine la pretensión de extinción del dominio.

157. Así, cuando el bien es utilizado o es instrumento en la comisión del delito, no se le atribuye necesariamente una procedencia ilícita. A diferencia de dicha hipótesis, cuando se asevera que el bien es "producto del delito", ello sí implica que el bien es de procedencia ilícita, esto es, que se adquirió con recursos obtenidos con la comisión del hecho ilícito. Entonces, en aquellos

---

[27] "II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
"a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.
"b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.
"c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
"d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por esos delitos se comporte como dueño."

casos en que el bien se considera "producto del delito", cobra mayor peso la prueba sobre la adquisición del bien con recursos de procedencia lícita, pues es así que puede el afectado desvirtuar la aseveración de la actora, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas que demuestren que el bien lo adquirió por una vía distinta a la comisión de un delito. En estos casos, el afectado tiene la carga de demostrar un hecho concreto positivo: la procedencia lícita del bien.

158. Sin embargo, cuando la acción de extinción de dominio no se ejerce sobre la base de que el bien es producto del delito, sino sobre la base de que es instrumento del delito o utilizado en la comisión de delitos, la situación cambia, puesto que en esos casos, la prueba de la procedencia lícita de los bienes, si bien no resulta inútil, sí pierde relevancia, ya que no se cuestiona la procedencia del bien, sino el uso que se le da.

159. Asimismo, la prueba de la procedencia lícita de los bienes también resulta trascendente **cuando existe una relación de confianza** entre una o varias de las personas que se consideran indiciadas en la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional, y quien aduce ser un "tercero de buena fe", en cuyo caso debe descartarse la posible actualización de la hipótesis del inciso d), que señala:

"II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

"…

"d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por esos delitos se comporte como dueño."

160. Este inciso regula el caso de los prestanombres o testaferros. Tal como se precisó al examinarse las causas que dieron lugar a la incorporación de la extinción de dominio a nuestro sistema jurídico, el Constituyente Permanente fue muy insistente en que el objetivo principal de la acción de extinción de dominio es privar a las bandas criminales de los bienes que utilizan para la comisión de los delitos, destacando que, por regla general, dichos bienes no están a nombre de los procesados, y aun cuando sea evidente que se utilizan como instrumento para el delito o que son producto de operaciones delictivas, debido a esa falta de relación directa con los procesados, el Estado no puede allegarse de ellos.

161. Precisamente, con la finalidad de allegarse de dichos bienes creó la acción de extinción de dominio, la cual no requiere de que los bienes que se

utilizan para cometer los ilícitos estén a nombre de los procesados, sino que se acredite que son "producto", "instrumento" u "objeto" del delito.

162. Sin embargo, como se explicará con detenimiento más adelante, para no dejar en indefensión a los propietarios del bien que no estén implicados en la comisión del ilícito, el inciso c) de la fracción II del artículo en comento impone al Ministerio Público que aporte indicios del conocimiento de éste respecto del uso indebido de su bien.

163. Por lo anterior, el mero hecho de que el bien esté intitulado a favor de un tercero, no implica necesariamente que ese tercero sea de buena fe, puesto que bien podría tratarse de un prestanombres; para descartar esa posibilidad resulta relevante la prueba de la procedencia lícita del bien.

164. Ahora bien, la prueba de procedencia lícita se traduce en que el titular del bien aporte elementos de prueba que razonablemente conduzcan al juzgador a la convicción de que el bien tiene un origen lícito, como puede ser, enunciativa y no limitativamente, exhibir el instrumento público que demuestre que lo obtuvo por herencia, que lo adquirió en virtud de un préstamo bancario, o que a la fecha de adquisición del bien contaba con ingresos de procedencia lícita, suficientes para la adquisición del bien, ya sea mediante la exhibición de su declaración de impuestos, pagos provisionales de los mismos, constancias de retenciones de salarios, o de pagos a las instituciones de seguridad social.

165. Al respecto, no debe soslayarse que la carga de que se trata encuentra mayor dificultad cuando ha pasado bastante tiempo desde la adquisición del bien, en cuyo caso no se tiene la obligación de conservar la documentación mencionada (por ejemplo, los contribuyentes se encuentran obligados a conservar su documentación fiscal solamente por el plazo de cinco años); de manera que, en aquellos casos en que la adquisición del bien se haya realizado más de diez años atrás, atendiendo a que ése es el plazo mayor de prescripción que establece la ley, no sería razonable exigir que se almacene o archive toda la documentación y, por tanto, se demuestre en forma detallada y precisa el origen de cada peso con el cual se pagó el precio del bien; en tales casos, sí es posible aportar elementos de prueba o indicios que puedan razonablemente conducir al juzgador a la convicción de que el bien tiene procedencia lícita, documentos, testimoniales o cualquiera otra, siempre que no esté prohibida por la ley, en cuyo caso el juzgador debe atender a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, en relación con las circunstancias del caso, al llevar a cabo su valoración.

166. Lo anterior es importante para descartar la hipótesis del inciso d) multicitado, de manera que sólo aquel titular que acredite la procedencia lícita

del bien, conforme al parámetro establecido, podrá ser considerado "tercero o afectado de buena fe", para los efectos del inciso c), fracción II, del artículo 22 constitucional.

167. Ahora bien, el inciso c) de la fracción II del precepto constitucional en análisis, establece una regla específica aplicable al afectado de buena fe, como sigue:

"II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

"...

"c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos **por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello** y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo."

168. De dicho inciso se desprende que, cuando se trata de terceros afectados de buena fe, la carga de la prueba de la parte actora no se satisface acreditando solamente el hecho ilícito y el involucramiento de los bienes, sino que el Ministerio Público también debe aportar los datos que razonablemente permitan involucrar a su propietario o considerar, aun indiciariamente, que el propietario tenía conocimiento de los hechos. Esos requerimientos son indispensables para no dejar al tercero de buena fe en estado de indefensión, como se demostrará a continuación:

169. La fracción III del artículo 22 constitucional establece que el afectado, esto es, el propietario de los bienes objeto del juicio de extinción de dominio, sólo puede defenderse probando lo siguiente:

"III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes."

170. Por tanto, en los términos de la fracción III del artículo 22 constitucional, el afectado, propietario de los bienes, sólo debe demostrar tres cuestiones: (1) la procedencia lícita de los bienes; (2) su actuación de buena fe; y, (3) que estaba impedido para conocer la utilización ilícita de sus bienes. Ahora, cuando la acción se ejercita sobre la base del "uso" que se les da a los bienes, y está acreditada en el juicio una relación de confianza entre alguna de las personas procesadas en la causa penal y quien aduce ser tercero de buena fe, adquiere trascendencia la prueba atinente a la procedencia lícita de bienes.

171. Sin embargo, en atención a que en el sistema jurídico mexicano opera la presunción de buena fe, para demostrar tanto el segundo como el tercero de esos elementos, se presenta un inconveniente de orden lógico, pues: ¿Cómo acredita el propietario de manera fehaciente que mantuvo su buena fe y, por tanto, que no tuvo conocimiento del uso ilícito que se le estaba dando al inmueble durante todo el lapso en que se aduce se utilizó para la comisión de delitos?

172. Tendría que probar plenamente que durante las 24 horas de cada día de dicho lapso, actuó de buena fe, porque siempre se le podrá decir, la prueba presentada sólo acredita una actuación diligente en una fecha determinada, pero no en las demás.

173. El mismo razonamiento se aplica a la obligación de acreditar que el propietario "estaba impedido" para conocer de los hechos. ¿Cómo se acredita que durante un lapso una persona tuvo desconocimiento de un hecho y que no pudo conocerlo?

174. Esta Primera Sala estima que si se deja la carga absoluta de la prueba al afectado respecto de su buena fe y de que estaba impedido para conocer la ilícita utilización del bien, la "buena fe" deja de ser un deber moral de conducirse honradamente en la convivencia humana,[28] para convertirse en la exigencia de vigilar a los otros en todo momento, y de documentar dicha vigilancia, para poder acreditar que a falta de indicios, no tenía la obligación de notificar nada.

175. Acreditar la "buena fe" a falta de indicios o elementos de prueba que demuestren la mala fe del afectado, se torna prácticamente imposible.

176. Por lo anterior, la interpretación correcta de la fracción II, inciso c), en relación con la fracción III del artículo 22 constitucional, necesariamente requiere de que la parte actora aporte datos que razonablemente permitan considerar la mala fe del afectado, o indicios de que tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de los hechos delictivos, ya que sólo dándole al afectado la posibilidad de desvirtuar dichos datos o elementos puede "demostrar" su actuación de buena fe, en los términos señalados por la fracción citada.

177. Lo anterior confirma el principio general del derecho que señala que la "buena fe" se presume. Lo cual es acorde al principio ontológico de la prueba,

---

[28] *Diccionario Jurídico Mexicano* del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México, 1995, página 362.

puesto que lo ordinario, que viene a ser la buena fe, se presume, y lo extraordinario, que es la mala fe, se prueba.

178. La buena fe se traduce en "ausencia de mala fe", "ausencia de dolo". El "estar impedido" para conocer un mal uso de un bien, se traduce también en hechos negativos: "no poder" conocer, en "un desconocimiento", otro hecho negativo.

179. Es un principio del derecho que los hechos negativos no se prueban. Conforme al principio lógico de la prueba, los hechos positivos se prueban porque es más fácil demostrarlos, se pueden demostrar con pruebas directas e indirectas. Por el contrario, los hechos negativos pueden ser de naturaleza formal o sustancial. Los hechos negativos formales tienen como contenido un aserto positivo, y sólo tienen de negativo la forma en que se exponen.

180. Los hechos negativos formales se regulan en el artículo 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:

"**Artículo 282.** El que niega sólo será obligado a probar:

"I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;

"II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante;

"III. Cuando se desconozca la capacidad;

"IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción."

181. Sólo dichos hechos negativos pueden ser objeto de prueba. Los hechos negativos sustanciales no pueden ser objeto de prueba, porque son verdaderas negaciones que no se resuelven en asertos positivos.

182. Pues bien, la "ausencia de mala fe o de dolo" o el "desconocimiento" de ciertos hechos, en forma general, sin la existencia de indicios o datos en contrario, son hechos negativos sustanciales, cuya prueba se torna prácticamente imposible.

183. Por ello, la interpretación del artículo 22 de la Constitución Federal, debe hacerse de forma sistemática, atendiendo a todas sus fracciones e incisos en conjunto, y no en forma aislada.

184. Ya que sólo de esa manera se destruye la presunción de buena fe que tiene el afectado, y éste puede aportar, a su vez, elementos de prueba para desvirtuar la mala fe que se le atribuye.

185. En ese tenor, la norma no debe interpretarse en el sentido de que la carga probatoria corresponde en su totalidad al afectado, pues una interpretación con esos alcances llevaría a sostener que la acción de extinción de dominio impone una presunción *iure et de iure* de culpabilidad en el propietario de los bienes, la cual sólo puede ser desvirtuada, por ejemplo, habiendo sido declarado en estado de interdicción.

186. Eso no es lo que dice el Texto Constitucional, no lleva a un equilibrio entre la acción de extinción de dominio y las garantías constitucionales, ni puede ser una interpretación razonable del artículo 22 en análisis.

187. El Texto Constitucional contempla expresamente el derecho de defensa del afectado, y para que dicha defensa pueda tener lugar, las fracciones II y III del artículo 22 constitucional, deben interpretarse conjuntamente, para concluir que el ejercicio de la acción de extinción de dominio **impone a la parte actora la obligación de aportar al juicio *elementos suficientes para acreditar***:

(1) Que sucedió el hecho que se adecua a la descripción legal de los delitos de *delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas*, contenidos en la legislación penal que sea aplicable para juzgar el delito que corresponda;

(2) Que los bienes objeto del juicio son instrumento, objeto o producto de los delitos enumerados en el inciso anterior; y,

(3) Asimismo, en el caso de que la acción de extinción se ejerza por actualizarse el supuesto descrito en la última fracción, esto es, que los bienes están siendo usados por un tercero, que el dueño tuvo conocimiento de lo anterior, el Ministerio Público deberá aportar los datos que razonablemente prueben dicho conocimiento.

188. De manera que la acción de extinción de dominio resultará procedente si el actor aporta datos e indicios en los términos apuntados, para acreditar dichas cuestiones, y el afectado no logra desvirtuarlas para demostrar o restablecer su buena fe.

189. La interpretación que antecede logra el punto de equilibrio entre la acción de extinción de dominio y el respeto de las garantías constitucionales de los gobernados, en particular, de los afectados de buena fe, ya que obliga a la autoridad a aportar los datos que razonablemente permitan considerar que el afectado tenía conocimiento de esa situación, es decir, elementos encaminados a demostrar la mala fe del afectado, lo cual se traduce en hechos concretos que éste puede tratar de desvirtuar.

190. Se traduce en una carga de la prueba dinámica, que no queda en forma absoluta en una sola de las partes, y que se compone de hechos concretos, susceptibles de acreditarse y de desvirtuarse, y no en hechos negativos sustanciales que se vuelven de imposible acreditación.

191. Una interpretación contraria, además de conculcar el orden constitucional y validar la actuación arbitraria por parte de la autoridad, no llevaría al cumplimiento de la finalidad que persigue la figura de extinción de dominio: combatir a la delincuencia organizada.

192. No debe pasarse por alto, que el objetivo de la acción de extinción de dominio radica en tener una herramienta *eficaz de combate al crimen organizado*, encaminada a privar a la delincuencia organizada de su patrimonio, para debilitarlo en su estructura económica, que es lo que lo fortalece y le permite acceder a medios cada vez más sofisticados para delinquir. Pues bien, si se priva de un bien a una persona que no es parte de la delincuencia organizada ni está involucrada con la misma, no se va a debilitar a la delincuencia organizada, ni su patrimonio.

193. Ahora, a falta de pruebas directas, la mala fe debe acreditarse adminiculando diversos indicios que conduzcan al juzgador a la convicción de que el afectado conocía y permitía la comisión de los delitos con sus bienes.

194. Hay toda una diversidad de pruebas que se pueden aportar para demostrar que el afectado estaba involucrado en la delincuencia organizada, que se conducía como testaferro, o que estaba vinculado de una u otra manera. Lo que no es válido, es omitir la investigación correspondiente y pasar la carga absoluta de la prueba al afectado.

195. Asimismo, el artículo 14 de la Constitución Federal recoge expresamente la aplicación de los principios generales del derecho a los juicios del orden civil,[29] entre los cuales se encuentra la presunción de buena fe. La regla general es que la "buena fe" se presume, según se desprende de los artículos 25 y 807 del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, que literalmente disponen:

---

[29] "**Artículo 14.** … En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

"Artículo 257. La buena fe se presume; para destruir esta presunción se requiere prueba plena."

"Artículo 807. La buena fe se presume siempre; al que afirme la mala fe del poseedor le corresponde probarla."

196. Al respecto, cabe hacer referencia al contenido de la conferencia impartida el veinticuatro de marzo de dos mil nueve por el doctor **********, embajador de Colombia en México, a miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,[30] quien, en lo que interesa, expuso lo siguiente:

"Se debe tener la convicción por parte del fiscal de conocimiento antes de iniciar el proceso, de que se cuenta con prueba suficiente para arribar a una sentencia de extinción de dominio; por ello no se otorga tiempo limitado como sucedía en la anterior legislación para esa etapa preprocesal; se debe llegar entonces al inicio del proceso con suficientes elementos; de manera que el periodo probatorio dentro del proceso, lo será en esencia para las partes procesales, sin que obviamente ello sea óbice para que la fiscalía actúen (sic) en lo que considere pertinente.

"...

"Tratándose de terceros, se verificará si probatoriamente se ha logrado desvirtuar la presunción de buena fe y consiguientemente, estamos ante culpa grave o dolosa; si se logró probatoriamente quebrantar aquélla, la resolución de procedencia deviene procesalmente.

"...

"Todo ello conduce a la necesidad de recurrir a objetividades, que en últimas permitirán elaborar los indicios que en términos generales, conducirán a sostener las aseveraciones procesales que de ella se deriven.

"...

"Los medios de prueba que se utilizan para arribar a la certidumbre probatoria que requiere la declaración de extinción de dominio, generalmente

---

[30] *Extinción del Derecho de Dominio.* Conferencia del Embajador de Colombia, en la Revista del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, año II, No. 4, diciembre de 2009, páginas 101-148.

tiene el carácter de indiciaria, a menos que (y serán pocos los casos), se tenga la prueba directa (confesión, por ejemplo); de todas formas la certeza probatoria debe estar presente, aunque no en igual medida por lo que se ha indicado, frente a una sentencia de carácter penal.

"…

"**Ejemplos de la prueba indiciaria, el caso del *habitus*: conducta antecedente, haber estado involucrado en fraudes, simulaciones, actividades ilícitas, ser recurrente en este tipo de acciones; falta de medios económicos o cambio súbito de su situación: el salario no le alcanzaría para determinada compra; carecer de otra actividad que le permita incremento patrimonial; préstamos con circunstancias que escapan a la normalidad: sin fecha cierta, sin garantías, sin intereses, prácticamente una donación**; incuria en la atención del proceso: normalmente una persona que tiene ingresos lícitos, carece de dificultad para mostrar el origen de los recursos que posee; tampoco obstaculiza la prueba, ni se le dificulta su obtención. Pero cada caso suministrará los indicios que le son propios; conducta adaptativa: frente a una determinada situación, el sujeto se acomoda a las nuevas circunstancias, a fin de ocultar su situación marginal, en cuanto al origen de los recursos.

"…

"**La carga de la prueba**

"El concepto de la carga de la prueba, es el que se debe manejar en este procedimiento y no el principio de presunción de inocencia; ello deviene como lógico y coherente, de acuerdo a la ideología en que se inscribe la acción de extinción de dominio; en efecto, en tratándose de una acción real con toda su carga semántico jurídica, los principios que orientan dicha acción son más del proceso civil, que no penal como equivocadamente se ha pretendido.

"…

"No se invierte, pues, la carga de la prueba, ni se pretende ello, debido a los parámetros legales del sistema jurídico; sólo a partir de unas probanzas, aportadas por demandantes, en otros por los fiscales instituidos para el caso, una aseveración a partir de prueba indiciaria o sumaria, que objetivamente muestre unos hechos, los cuales conforme a las causales contempladas en

el artículo 2o. de la Ley 793 de 2002, resultan con vocación para la extinción del derecho de dominio.

"Se presentan probanzas que permiten colegir al funcionario correspondiente y así se le hace saber a quienes de alguna manera puedan resultar afectados con las decisiones sobre extinción de dominio, que se cuenta con el caudal probatorio a partir del cual se hacen unas afirmaciones, frente a las de quienes se consideren afectados, habrán de proponer los medios exceptivos del caso, a fin de contradecir lo aseverado; entonces, como puede advertirse, no existe inversión de la carga de la prueba porque ello no es necesario, ya que al contar con medios de convicción, que generalmente serán los indiciarios por la naturaleza y circunstancias de los soportes de acción, con base en ellos, se procede.

"...

"**Los terceros; en especial el concepto de buena fe.**

"Las normas legales, y de manera enfática tanto la Ley 333 de 1996 en su artículo 12, como el Decreto Legislativo 1975 de 2002 y la Ley 793 de la misma anualidad, vigente, señalan **la necesidad de garantizar los derechos de los terceros, con el agregado de que sean de buena fe**; en **la última norma se agrega además**, que ésta sea exenta de culpa; por ello es que los conceptos deben ser tratados en forma conjunta para su cabal entendimiento, constituyendo el último complemento necesario del primero, tal como está concebido.

"...

"El tercero, es la persona titular de derechos reales principales o accesorios que eventualmente vale decir, circunstancialmente pueden verse involucrados a través de sus bienes o derechos en trámite de extinción de dominio; es la persona que en principio no tiene relación con la situación; pero que de alguna forma puede resultar a priori afectada.

"La buena fe, se presume constitucionalmente (artículo 83 C.P.), así como en el ordenamiento civil (artículo 769 del Código Civil); por igual, las normas ya mencionadas; no obstante así no hubiese sido mencionado siquiera en éstas, es claro que sus derechos quedan a salvo. Sólo cuando se establezca por los medios probatorios indicados en la ley, el proceder con dolo o culpa

grave pueden involucrar sus derechos en la determinación definitiva respecto a la extinción de dominio."

197. En atención a todo lo anterior, para generar la congruencia en el sistema y activar la dinámica de las cargas probatorias a partir de hechos objetivos y no de una presunción de mala fe, se advierte necesario que el Estado aporte datos que vinculen al propietario de los bienes objeto del proceso de extinción de dominio, o que permitan afirmar, aun indiciariamente, que tenía conocimiento de que sus bienes estaban siendo utilizados en la comisión de los delitos, lo cual es necesario para destruir el principio general del derecho de presunción de buena fe.

198. En esa misma línea, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, también conocida como "Convención de Palermo", a la cual se le atribuye la regulación de la acción de extinción de dominio, prevé expresamente que las disposiciones que autorizan al Estado el decomiso o incautación de bienes de procedencia ilícita o utilizados en la comisión de delitos por parte de la delincuencia organizada, no deben interpretarse en perjuicio de los terceros de buena fe.[31]

---

[31] "*Artículo 12. Decomiso e incautación*
"1. Los Estados parte adoptarán, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:
"a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;
"b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en la presente convención.
"2. Los Estados parte adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.
"3. Cuando el producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.
"4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado.
"5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido el producto del delito o de bienes con los que se haya entremezclado el producto del delito también podrán ser objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.
"6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de la presente convención, cada Estado parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.
"7. Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la

199. Precisada la interpretación y el alcance que tiene el artículo 22 constitucional, ha lugar, entonces, a partir de lo anterior, a contestar la siguiente pregunta formulada a partir de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo:

¿**Cuáles son los alcances de la autonomía entre el proceso penal y el proceso de extinción de dominio que prevé dicha norma constitucional**?

200. El artículo 22 constitucional dispone:

"**Artículo 22.** Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

"No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. **En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas**:

"**I.** Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

"**II.** Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

"**a)** Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad

---

medida en que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas.
"8. **Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe**. ..."

penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

"**b)** Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

"**c)** Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

"**d)** Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

"**III.** Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes."

201. Como se advierte, por disposición expresa del artículo transcrito, la comisión de uno de los delitos que ahí se establecen puede dar lugar a dos juicios: el de extinción de dominio y el penal. Así, lo resuelto en el juicio penal puede derivar en una sentencia de condena privativa de libertad y/o de carácter pecuniario, entre otras, respecto del sujeto al que se le atribuye la comisión del hecho ilícito; mientras que la sentencia civil será de naturaleza declarativa y constitutiva, y afectará al propietario del bien del que se pretenda extinguir el dominio y que no necesariamente habrá de guardar identidad con la persona que haya cometido el delito.

202. Es en esas circunstancias, que el referido artículo constitucional prescribe que el proceso de extinción de dominio es jurisdiccional y **autónomo** del proceso penal; en tal virtud, la cuestión a dilucidar no es si existe o no tal autonomía, sino determinar cuáles son sus alcances, esto es, si existe una desvinculación **absoluta** o si ésta es **relativa**, para lo cual es oportuno conocer el significado, tanto etimológico como gramatical del vocablo "autonomía".

203. En cuanto a lo primero, esa palabra deriva de las voces griegas "*autos*" (por sí mismo) y "*nomos*" (ley); autónomo es, pues, quien se da su

propia ley; en tanto que, sobre la definición que de ese término se ha dado, el *Diccionario «de la Lengua Española»*, de la Real Academia Española[32] entiende por autonomía, lo que enseguida se reproduce:

"1. Estado y condición del pueblo que goza de entera independencia política. 2. Condición del individuo que de nadie depende en ciertos conceptos. 3. Potestad que dentro del Estado pueden gozar Municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios ..."

204. Ahora bien, en el plano jurisdiccional, la autonomía puede tener dos funciones distintas: a) constituir una fuente de normas jurídicas destinadas a integrar el ordenamiento; y, b) ser presupuesto y fuente *de relaciones jurídicas ya disciplinadas por ese mismo ordenamiento*.

205. En el caso, la autonomía a que se refiere el artículo 22 constitucional, debe entenderse como la independencia de aquel que juzga sobre el tema de la extinción de dominio sobre ciertos bienes por la comisión de uno de los delitos a que se refiere la propia norma constitucional, y del que ha de emitir decisión en cuanto a la responsabilidad de quien se encuentra sujeto al juicio penal. Esa autonomía involucra independencia en la normatividad que cada uno de ellos ha de aplicar en el proceso del que es rector, independencia en el desarrollo de cada uno de los juicios e independencia en la decisión que adopten sobre temas respecto de los cuales no compartan jurisdicción (básicamente, la responsabilidad penal, por no ser éste un tópico sobre el que ambos Jueces deban decidir); sin embargo, tal separación no se aplica en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese preciso aspecto, existe una vinculación total, de manera que, por regla general, el Juez de extinción de dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el Juez especializado en la materia penal cuando éste concluye que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados.

206. Al respecto, se parte de la base de que, desde su génesis, ambos procesos tienen como denominador común los hechos que dieron origen a una averiguación previa que, una vez escindida, da lugar a dos tipos de juicio: el de *extinción de dominio* (enderezado a declarar derechos patrimoniales) y el *penal* (encaminado a la sanción por la comisión de delitos), situación que

[32] Editorial Real Academia Española, décimo novena edición, tomo I, Madrid, 1970, página 145.

impide afirmar la existencia de una autonomía absoluta, pues el propio artículo 22 constitucional, sujeta a ambos procedimientos entre sí.

207. En efecto, la disposición de que se trata prevé que la extinción de dominio procede respecto de los bienes que sean instrumento, objeto o producto del delito, "*aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió*".

208. La redacción del artículo permite afirmar válidamente que el legislador partió de la base de que paralelamente al ejercicio de la acción penal, se ejercería la acción de extinción de dominio; de ahí que, en primer orden, el Estado (a través del Ministerio Público) habría de llevar a cabo las investigaciones para la persecución del delito, e incluso, en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal de contar con los elementos necesarios para ello, pues solamente así se explica la aclaración, en el sentido de que la extinción de dominio procede "*aun cuando no se haya dictado*[33] (en el proceso penal) *la sentencia que determine la responsabilidad penal*", lo que supone que ha habido al menos una calificación a cargo de la autoridad judicial penal sobre la existencia de alguno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional, como presupuesto para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, calificación que pudo obedecer a la petición de girar una orden de aprehensión, en términos del artículo 16 constitucional,[34] al dictado del auto de formal prisión o a uno de sujeción a proceso, y en virtud de lo cual, debiera tramitarse un juicio en la vía penal y, en su momento, resolverse por el Juez competente.

209. En esas circunstancias, por regla general, la acción de extinción de dominio está sujeta a que el Juez de la causa penal haya emitido alguna decisión (en orden de aprehensión o comparecencia, auto de formal prisión o de sujeción a proceso) en la que afirme que los hechos consignados por el Ministerio Público acreditan el cuerpo del delito de alguno de los ilícitos

---

[33] Una inferencia de tal aclaración llevaría necesariamente a afirmar que la sentencia penal habrá de dictarse en algún momento.

[34] "**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. … **No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión**. …"

previstos en el artículo 22 constitucional, a fin de dar seguridad jurídica desde el inicio del juicio de extinción de dominio.

210. Al respecto, no queda inadvertido que una decisión judicial de esa naturaleza está sujeta a que exista una consignación ante el Juez penal, lo que supone que se conoce de la existencia de algún sujeto a quien se le imputa la comisión del delito; sin embargo, con el conocimiento de que existen casos en los que el Ministerio Público se encuentra imposibilitado para ejercer la acción penal porque, a pesar de haber localizado bienes que, por ejemplo, se emplean como instrumento u objeto del delito, e inclusive que son producto de aquél, se desconoce la identidad del probable responsable de su comisión, supuesto en el cual, no sería posible ejercer la acción penal ni, por ende, obtener una resolución judicial en la que se califique si los hechos consignados constituyen o no uno de los delitos previstos en el artículo 22 constitucional. En ese tenor, debe admitirse que tales casos constituyen una excepción a la regla y que, entonces, ante la falta de calificación del delito a cargo del Juez de la causa penal, corresponde al Juez de extinción de dominio, a partir de los elementos aportados por el Ministerio Público, resolver si con ellos se demuestra la comisión del hecho ilícito, esto, siempre que dicha representación social haya realizado una investigación exhaustiva para la identificación del probable responsable, sin obtener resultado alguno, y en el entendido de que el estándar de prueba se torna de mayor rigor para la representación social.

211. La excepción mencionada tiene lugar, porque lo que carece de relevancia en el juicio de extinción de dominio, es la decisión que el juzgador penal adopte sobre la probable responsabilidad penal del inculpado o su culpabilidad en sentencia definitiva, pues tal responsabilidad no constituye uno de los elementos necesarios para declarar extinto el dominio del propietario; sin embargo, lo que necesariamente trasciende es la no comprobación de los elementos del "*cuerpo del delito*", situación que impacta, porque puede oponerse a la acreditación del "*hecho ilícito*" que, en su caso, llegue a decretar el Juez civil, en el entendido de que ambos supuestos (cuerpo del delito y hecho ilícito) se identifican según lo dispuesto en el artículo 2 de Ley Federal de Extinción de Dominio, que remite al artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales.

212. Ese impacto del que se habla, guarda una estrecha relación con el tema de la prueba y su valoración a cargo de los juzgadores, quienes habrán de observar las disposiciones legales aplicables contenidas tanto en la Ley Federal de Extinción de Dominio, específicamente, los artículos 31 a 40, como

en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 4 de la citada en primer orden.[35]

213. En relación con esto, el Código Federal de Procedimientos Civiles dispone en sus artículos 79 y 80:

"**Artículo 79.** Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

"Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes."

"**Artículo 80.** Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad."

214. Con fundamento en esas disposiciones, es evidente que el Juez de extinción de dominio se encuentra facultado para requerir oficiosamente al Juez ante quien se siga la causa penal, las constancias del juicio a fin de

[35] "**Artículo 4.** A falta de regulación suficiente en la presente ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: **I.** En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales; **II.** En el juicio de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles; **III.** En la administración, enajenación y destino de los bienes, a lo previsto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y **IV.** En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil Federal.—Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta ley se regirá en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.—La documentación e información obtenida de averiguaciones previas, se sujetará a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.—El procurador general de la República entregará un informe anual al Congreso de la Unión, sobre el ejercicio de las facultades que le otorga esta ley."

estar en posibilidad de resolver de manera congruente con la de su homólogo penal, en lo que ve a la acreditación del hecho ilícito que haya dado lugar al ejercicio de la acción de extinción de dominio, si acaso aquél ha dictado una resolución de naturaleza intraprocesal en donde haya decretado la no acreditación del cuerpo del delito, o bien la no demostración del delito tratándose se sentencia definitiva.

215. En tal virtud, aun en el supuesto de que el juicio de extinción de dominio haya iniciado con la aplicación de la excepción mencionada (es decir, sin una decisión a cargo del Juez de la causa penal), debe decirse que, en caso de que durante el trámite del juicio de extinción de dominio, haya habido alguna consignación y, por ende, el Juez de ese proceso penal llegue a emitir alguna decisión sobre la acreditación del cuerpo del delito, deberá retomarse la regla general y, por ende, su decisión impactará en la decisión del Juez de extinción de dominio si acaso aquél resuelve su no demostración.

216. En esas circunstancias, se concluye que la autonomía que prescribe la norma constitucional no es absoluta sino relativa, porque la calificación del cuerpo del delito en el proceso penal debe impactar en el proceso de extinción de dominio, a grado tal, que si no se acreditan sus elementos, no hay posibilidad alguna de que el Juez civil continúe con el proceso de extinción de dominio, tal como lo consideró el legislador federal, según consta en el contenido de los artículos 10 y 50 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, que impiden la contradicción de criterios en aras de respetar el principio de seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de derecho, pues, en el caso en que se trate de una contradicción de criterios injustificada, el afectado estaría en aptitud de hacerlo valer ante el Juez de extinción y reclamar la devolución del bien cuyo dominio ha quedado extinto o, en su defecto, la indemnización por daños y perjuicios.

217. Así las cosas, en atención a las premisas que han quedado establecidas, es el caso de dar contestación a la última de las interrogantes formuladas:

En este preciso asunto, ¿tiene algún impacto lo resuelto en el juicio penal sobre la no acreditación del delito?

218. De acuerdo con las consideraciones desarrolladas en la presente ejecutoria, la respuesta a dicha pregunta es, sí, la decisión adoptada por el Juez penal sobre la acreditación del delito o sobre su no demostración, nece-

sariamente incide en el juicio de extinción de dominio pues, tal como quedó explicado, un pronunciamiento del juzgador de la causa penal en el sentido de que no se demostraron los elementos del delito lleva a desestimar la pretensión de extinción de dominio.

219. En relación con esto, la quejosa aduce, por un lado, que la autoridad responsable no tomó en cuenta el vínculo que existe entre un procedimiento judicial y, el otro, lo que dio lugar a que valorara indebidamente las pruebas aportadas al juicio, en especial, las actuaciones derivadas del juicio de amparo **********, en el que el Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó a **********, la protección de la Justicia Federal en contra de los actos del Juez Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal, en la causa penal **********, para el efecto de que dicho juzgador de primer grado partiera de la base de que los elementos probatorios allegados al juicio no fueron suficientes para demostrar los elementos del delito.

220. Esos conceptos de violación son fundados.

221. Esto, porque la decisión adoptada por la autoridad responsable se opone diametralmente al criterio adoptado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la autonomía entre el juicio penal y el juicio de extinción de dominio, pues, en opinión del tribunal de alzada, la sentencia dictada por el Juez Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal, en la causa penal *********, no trasciende para la resolución del juicio de extinción de dominio, cuando la conclusión alcanzada por esta Primera Sala, es en el sentido de que, precisamente, la sentencia penal en la que se resuelve la no acreditación del delito impacta en la decisión que deba adoptar el Juez de extinción de dominio.

222. En el caso, tal como lo explica la quejosa, en el juicio de amparo **********, del índice del Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó a **********, la protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes:

"Transgresión de garantías que, atento a los dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, produce, como consecuencia, que se conceda a **********, la protección constitucional que solicita, para los efectos de que la Jueza Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal: a) deje insubsistente el auto de formal prisión, de dieciséis de diciembre de dos mil diez, dictado el mencionado dentro de la partida **********, por su posible responsabilidad

en la comisión del delito de robo agravado; y, b) dicte en su lugar una nueva resolución, en la que declare que no existe prueba suficiente para acreditar el cuerpo del delito de robo agravado motivo del ejercicio de la acción penal, determinando, en consecuencia y con plenitud de jurisdicción, lo que en derecho proceda; en la inteligencia que de estimar que la conducta del quejoso integra diverso ilícito, se reserva jurisdicción a la Jueza penal para que reclasifique aquel que fue motivo del ejercicio de la acción penal, siempre y cuando no se varíen los hechos materia de la consignación, como lo autoriza la tesis de jurisprudencia 1a./J. 3/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: 'AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.—Conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la autoridad judicial, a través del auto de formal prisión, clasificar los hechos ante ella consignados y determinar qué delitos configuran, por lo que también está facultada para cambiar la clasificación del delito, esto es, modificar aquel por el que se ejerció la acción penal, y sujeta a proceso al acusado por otro, con base en el cual se normará la instrucción, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Es decir, la Norma Fundamental prohíbe la modificación de la sustancia de los hechos, pero no su apreciación técnica o su denominación legal.'

"Ahora bien, la concesión del amparo contra el auto de formal prisión, por no haberse acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado, trae consigo la declaratoria de invalidez de dicho auto, por lo que, formalmente, ya no estará sujeto a la etapa procedimental de la instrucción y será indispensable que la autoridad responsable defina su situación jurídica, pidiendo presentarse dos hipótesis: que aquélla reclasifique el delito por el cual se dictó el primer auto de formal prisión y se inicie el juicio por el ilícito cometido, en cumplimiento al artículo 19 mencionado, o bien, que no esté en condiciones de hacerlo porque ello implicaría variar los hechos materia de la consignación, en cuyo caso podrá dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley. Por tanto, en la sentencia que concede el amparo contra el auto de formal prisión dictado incorrectamente el juzgador puede reservar plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, reclasifique el delito por el cual se ejerció la acción penal y se continúe la instrucción, pues dicha facultad de reclasificación no se fundamenta en una declaratoria judicial, sino en el indicado precepto constitucional; sin que con ello se agrave la situación del inculpa-

do, porque la autoridad de amparo no vincula a la responsable a dictar un nuevo auto de formal prisión debidamente fundado y motivado, sino que sólo reconoce la posibilidad de reclasificar el delito."[36]

223. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el Juez Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal, en la causa penal **********, resolvió lo siguiente:

"Por lo que al no resultar los medios de prueba ya analizados idóneos ni suficientes para acreditar la conducta dolosa que pretende hacer valer la representación social, dado que de los mismos no se acredita la realización de la acción dolosa, toda vez que los mismos de ninguna manera resultaron bastantes para acreditar la conducta dolosa que le imputa la representación social, por tanto, y dado la prelación que debe existir para continuar con el análisis de los elementos tanto normativos como subjetivos del tipo que nos ocupa, ya que para esto debe acreditarse en primer término el elemento objetivo conducta, es que resulta ocioso entrar al estudio de dichos elementos así como de la respectiva calificativa que señala la representación social en su pliego de consignación, ya que para que esta última nazca a la vida jurídica, debe primeramente acreditarse el tipo básico de ROBO, lo mismo sucede con la probable responsabilidad penal, ya que para el estudio de ésta, es exigencia la acreditación del cuerpo del delito en estudio; por lo que ante la incomprobación de éste, es decir, el de ROBO AGRAVADO, por falta de elementos para procesar, SE DECRETA A **********, SU INMEDIATA LIBERTAD única y exclusivamente por lo que a esta causa y delito se refiere quedando la presente causa para los efectos del artículo 36 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para que el Ministerio Público investigador recabe las declaraciones de los testigos de hechos que se desprendan de la declaración del denunciante, y una vez esto, si así lo considera, consigne de nueva cuenta."[37]

224. En esas circunstancias, es inconcuso que la sentencia reclamada transgrede los derechos humanos del quejoso, al partir de una errónea interpretación del artículo 22 constitucional pues, sobre esa base, llevó a cabo una valoración de pruebas en la que desestimó lo resuelto por el Juez penal

---

[36] Página 7 de la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

[37] Resolución emitida en cumplimiento del juicio de amparo **********, en la causa penal **********.

en la causa seguida respecto del robo de vehículo que motivó la acción de extinción de dominio.

225. Ha lugar entonces a **conceder el amparo y protección de la Justicia Federal** al quejoso, para el efecto de que la Sala responsable:

(1) Deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado, y emita otra en la que:

(2) A partir de la interpretación realizada en esta ejecutoria tanto del artículo 22 de la Constitución Federal, como de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, resuelva desestimar la pretensión de extinción de dominio, al existir una sentencia ejecutoriada que resolvió sobre la no acreditación de los elementos del delito; y,

(3) Con plenitud de jurisdicción, resuelva sobre el tema de costas.

226. En atención a lo anterior, al resultar fundado y suficiente el concepto de violación en el que se alegó la indebida interpretación del artículo 22 constitucional, sobre la relación que guardan el proceso penal y el proceso de extinción de dominio, y la indebida valoración de pruebas sobre ese preciso aspecto, es innecesario ocuparse del estudio de los restantes conceptos de violación.

227. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

RESUELVE:

228. **ÚNICO.**—La Justicia de la Unión **ampara y protege a** **********, para los efectos precisados en el último apartado de esta resolución, en contra del acto reclamado precisado en el apartado primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo,

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Los Ministros Pardo Rebolledo y Gutiérrez Ortiz Mena señalaron que se reservan su derecho de formular voto aclaratorio.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto aclaratorio que formula el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en el amparo directo 22/2013.

En la sesión ordinaria celebrada el día dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 18/2010, declarando la validez de los artículos 25, último párrafo, 26 y 34, fracción I, de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal.

Como una cuestión previa al análisis de fondo del asunto, el Tribunal Pleno resolvió, por una mayoría de siete votos, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene competencia para legislar en relación con la figura de extinción de dominio prevista en el artículo 22 de la Constitución Federal, respecto de lo cual yo manifesté mi voto en contra.

Al respecto formulé oportunamente un voto aclaratorio en el que expongo las razones de mi disenso, las cuales sigo sosteniendo, motivo por el cual me aparto de las consideraciones de la sentencia que nos ocupa, en torno a la competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de extinción de dominio.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA. La extinción de dominio es una institución que involucra cuestiones de derecho penal, civil e incluso, administrativo; de ahí que la competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar sobre esa materia está contenida en el artículo 122, Base Primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el ejercicio de la función legislativa en

el Distrito Federal, en la parte que se encomienda a dicha Asamblea, corresponde a un régimen expreso y cerrado de las facultades enumeradas en la fracción V referida, que deberá ejercer en términos del Estatuto de Gobierno, en el entendido de que tales facultades no deben formularse necesariamente de forma literal, pues el régimen de facultades expresas que prevalece en nuestro orden jurídico, no puede llevar al extremo de exigir que en un solo precepto o con determinadas palabras se establezcan las atribuciones de la autoridad. Así, la "extinción de dominio" no es propiamente una materia cuya regulación, en su literalidad, deba asignarse a un órgano legislativo para entender que solamente si se encuentra expresamente así atribuida al órgano correspondiente pueda afirmarse su competencia legislativa, pues debe tomarse como referencia su naturaleza, que conjuga elementos del derecho penal, civil y administrativo, siendo en el primero donde encuentra su génesis, toda vez que es la existencia de cinco delitos específicos (delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas), la que justifica el inicio de los procedimientos de extinción de dominio. Entonces, al ser una figura ligada a la comisión de esos ilícitos cuya persecución puede corresponder en ciertos casos al orden local y, en otros, al federal, es inconcuso que debe atenderse a la competencia para legislar en esos delitos para conocer a quién corresponde su regulación legislativa, ya que es una consecuencia de su comisión y por virtud de la cual el Estado solicita a un juez que se apliquen en su favor bienes cuyo dominio se declare extinto en la sentencia y la víctima del delito puede obtener, efectivamente, la reparación del daño. Ahora bien, la competencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puede darse: a) en una vertiente normativa, donde se ubica la facultad de legislar sobre aspectos sustantivos como es el caso del delito de robo de vehículos; o, b) en una operativa, a la que corresponden los delitos que pueden ser concurrentemente perseguidos, juzgados y condenados, como lo son el narcomenudeo, la trata de personas y el secuestro; de manera que del contraste del catálogo constitucional, únicamente el delito de delincuencia organizada queda fuera de la competencia de ese órgano legislativo local, sea normativa u operativa. Por tanto, en la medida en que el Distrito Federal tiene competencia para conocer de los delitos mencionados, con excepción del de delincuencia organizada, debe entenderse que también está facultado para legislar en lo relativo a la figura de la extinción de dominio, que si bien es autónoma de los procesos penales respectivos, guarda relación con éstos, en tanto es su existencia la que justifica el inicio de

los procedimientos de extinción e inclusive, en el caso de que se dicte un fallo absolutorio, por no acreditarse los elementos del cuerpo del delito, su conclusión.

1a./J. 14/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 33/2013. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo en revisión 399/2012. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Julio César Ramírez Carreón, Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López y Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Amparo directo 22/2013. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio; Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Tesis de jurisprudencia 14/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince.

AMPARO DIRECTO 49/2012. Véase página 242.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Subsección 2.
POR CONTRADICCIÓN DE TESIS

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).

DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 130/2014. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 21 DE ENERO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.) de rubro y texto:

"Décima Época
"Registro: 2000331
"Instancia: Pleno
"Tesis: aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).—De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la

misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.

"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.

"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."

Así como en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diverso circuito, en un tema que no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—**Legitimación del denunciante.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO.—**Posturas contendientes.** Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos.[1]

1. Amparo en revisión 60/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito

Origen. La entonces parte quejosa promovió juicio de amparo contra un acuerdo emitido dentro del exhorto **3084/2012**, mediante el cual, la autoridad responsable en respuesta a la petición de la quejosa en relación a que se suspendiera la diligencia encomendada, tuvo por hechas sus manifestaciones para que fueran tomadas en consideración por el órgano exhortante, sin dar una respuesta en términos de lo que dispone el artículo 8o. constitucional; asimismo, ordenó desahogar la diligencia encomendada.

Una vez sustanciado el juicio, la Juez de Distrito, por un lado, al precisar los actos consideró que el acto reclamado no se traducía en una violación al derecho de petición, sino en una transgresión a lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues tiene un origen en un procedimiento judicial en el cual deben cumplirse las formalidades esenciales al procedimiento aplicables, lo que se traduce en una regulación distinta al derecho de petición en donde se debe obtener una respuesta en forma independiente al procedimiento judicial; por otro lado, sobreseyó en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracciones II y III, todos de la Ley de Amparo, al considerar que la vía indirecta resulta improcedente en contra de actos dictados en etapa de ejecución.

En contra de tal determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyas consideraciones establecen la materia del criterio ahora analizado.

Criterio. En lo que al tema interesa, el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito**, al resolver el recurso de revisión, en primer término consideró que la sentencia era incongruente, pues por un lado, en la precisión de actos se determinó que no se transgredía el artículo 8o. constitucional (cuestión que atañe al fondo del asunto) y, por otro lado, en un considerando posterior sobreseyó en el juicio de amparo. Por ese motivo, corrigió

[1] Lo subrayado de los siguientes criterios es propio y se hace con el objeto de resaltar lo que para efectos de la presente contradicción interesa.

la incongruencia, con la finalidad de proceder al estudio de los agravios, primero en contra del sobreseimiento y, posteriormente, en contra de las razones de fondo de la sentencia, para lo cual sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO.—Entonces, en debida congruencia se analizarán en primer lugar los agravios enumerados como cuatro y cinco, los que resultan esencialmente fundados.

"En efecto, sostiene la recurrente que la Jueza de Distrito al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con las fracciones II y III del diverso 114 de la Ley de Amparo anterior, no tomó en cuenta:

"1. La naturaleza del acto reclamado, pues señaló como tal un acuerdo en el que, según el parecer del quejoso, se violó el derecho de petición, ya que la autoridad responsable fue omisa en dar respuesta a lo efectivamente solicitado, por lo que la naturaleza del acto reclamado es totalmente distinta a las cuestiones que asimiló la juzgadora; y

"2. Es evidente, por tanto, que el acto reclamado es ajeno al procedimiento de remate, por lo que no debe estarse a la espera de la última resolución que se dicte en esa fase.

"Tiene razón el disconforme, ya que efectivamente la Jueza Federal inadvirtió que en la especie el acto se reclamó por contravenir **directamente** un precepto constitucional –artículo 8o. constitucional–, pues a consideración de la quejosa la autoridad responsable no contestó la petición que le realizó para que suspendiera la diligenciación del exhorto 3084/2012, enviado por el Juez Cuadragésimo Noveno con sede en México, Distrito Federal, a fin de que practicara una diligencia de actualización de avalúos en los bienes embargados a la aquí recurrente dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 555/2004, del índice del Juez exhortante.

"Consecuentemente no puede encuadrar ese acto en una violación intermedia como así lo determinó la Juez del amparo, sino que se trata de una violación directa a un precepto constitucional (artículo 8o.); de ahí que por ende, no se actualice la causa de improcedencia citada por la Juez de Distrito, porque partió de una premisa errónea para tenerla por demostrada.

"Por tales razones, debe levantarse el sobreseimiento al no actualizarse la causa de improcedencia determinada por la Jueza Federal, y analizar ahora las razones que llevaron a esa funcionaria a desestimar los conceptos de violación propuestos por el quejoso, las que se hicieron consistir en:

"I. El acto reclamado no se traduce en una violación al derecho de petición como lo planteó la demandante de garantías al referir que no se le contestó su petición.

"II. La quejosa pretende que en vía de amparo se obligue a la autoridad responsable a que se le conteste.

"III. La imposición del acto reclamado ponía en evidencia que la responsable sí se manifestó en relación con la petición que se le dirigió, pero no como lo quería la quejosa.

"IV. Por ello el acto en reclamo constituía una transgresión directa (sic) a las garantías de legalidad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y no a la garantía de derecho de petición del diverso 8o. de la propia Carta Magna.

"V. El actor reclamado tiene su origen en un procedimiento judicial donde la autoridad debe circunscribir su actuación a las formalidades esenciales del procedimiento o sustantivas aplicables, que es una garantía individual distinta a la regulación general relacionada con el derecho de petición, en donde se debe obtener una respuesta en forma independiente al procedimiento judicial.

"...

"Por su parte, la quejosa para refutar esas consideraciones argumenta que:

"a) Es inexacto que la responsable se hubiera manifestado en relación con la petición que le dirigió, pues evadió toda respuesta formal y válida, ya que sólo refirió que se tenía por hecha la manifestación formulada de su parte para que fuera tomada en consideración por el Juez exhortante; por lo que es evidente que no se le dio respuesta porque se señaló que otro Juez (el exhortante) es el que tendría que responder su petición.

"b) Si bien es cierto el acto reclamado emana de un procedimiento judicial, las autoridades están obligadas a que a toda promoción en que se formule una petición debe darse respuesta y si se omite hacerlo, ello se traduce en una violación al derecho de petición, pues esa omisión no sólo se aparta de toda formalidad de las contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, sino además, se desvincula de la función jurisdiccional que en el procedimiento tiene la autoridad como órgano rector de éste; de ahí que deba dar respuesta a lo que se le peticione y si no lo hace, su proceder encuadra en violación al artículo 8o. constitucional.

"c) Culmina señalando que contrariamente a lo determinado por la Jueza de Distrito, en los procedimientos jurisdiccionales sí se puede dar el caso de violación al derecho de petición.

"Por razón de técnica jurídica se analizará en primer lugar el agravio relativo a que en los procedimientos jurisdiccionales sí puede acontecer que los juzgadores violen el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, el que es sustancialmente fundado.

"Efectivamente, el precepto en cita dice: (se transcribe)

"Como puede verse del precepto transcrito, el derecho de petición implica la obligación que tiene la autoridad de dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y darlo a conocer en breve término al solicitante, es decir, lo que pretende la garantía constitucional es el derecho para los particulares de obtener respuesta a sus peticiones en breve término.

"Tal derecho de petición, sólo tiene correlación frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre ciudadanos y gobernantes.

"Se refiere también no sólo al resultado final de las peticiones formuladas, sino además a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento.

"Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, del Tomo XI, junio de 2000, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"'PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA.' (se transcribe)

"Igualmente, cobra aplicación la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 207, del Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, materia constitucional, Octava Época, de rubro y texto siguientes:

"'INDUSTRIA FARMACÉUTICA. EL ARTÍCULO 8o. DEL DECRETO DE FOMENTO Y REGULACIÓN (DIARIO OFICIAL DE 23 DE FEBRERO DE 1984) NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN.' (se transcribe)

"Ahora bien, si como ya se puntualizó, el propio artículo 8o. constitucional exige que para cumplir con la garantía del derecho de petición se requiere,

además de que la autoridad dé respuesta a lo solicitado, ello lo haga en breve término, sin distinguir la clase de autoridades, no se puede establecer legalmente la exclusión de las de índole jurisdiccional, pues si el legislador no lo hizo fue porque estimó que éstas también pueden incurrir en violación a esa garantía, como de hecho ocurre.

"Efectivamente, no se soslaya el hecho de que el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, establece específicamente la garantía de acceso a la justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, forma y procedimientos que establezcan las leyes, para obtener un pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional que resuelva las pretensiones.

"Sin embargo, cuando no se contesta alguna petición hecha valer dentro de esos procedimientos, esa falta de respuesta vulnera la garantía del derecho de petición contemplado en el artículo 8o. constitucional y no la diversa de tutela al acceso a la justicia prevista por el 17 de la propia Carta Magna, que impone el deber de las autoridades jurisdiccionales de dictar sus resoluciones en los plazos y términos que fijan las leyes, esto es, de manera pronta, o sea sin dilaciones.

"Dicho de otra manera, no es lo mismo la falta de respuesta a una solicitud (derecho de petición), que la obtención de esa respuesta de manera pronta y congruente (plenitud y expeditez en la administración de justicia).

"Pero además, de estimarse que como en los procedimientos jurisdiccionales, el particular tiene a su alcance los recursos o medios ordinarios para reparar esa violación, como se ha sostenido por algunos Tribunales Colegiados en las tesis que más adelante se detallarán y que por ello, refieren, no encuadra la violación en el artículo 8o. de la Constitución, sino en el diverso 17 de la misma, no se comparte esa idea, porque amén de que no puede existir recurso o medio de defensa contra la nada –que lo es la omisión de respuesta– no debe perderse de vista que aquéllos proceden contra determinaciones y no contra omisiones. Más aún, soslayando lo anterior, de todas suertes ya no se cumpliría con la obligación de respuesta en breve término como lo prevé tajantemente el multicitado artículo 8o. de la Constitución General de la República, pues la tramitación de recursos y medios de defensa conlleva ciertas formalidades que no pueden inobservarse y hay un tiempo determinado para que se resuelvan.

"De ahí que, se reitera, en los procedimientos jurisdiccionales sí puede darse el caso de violación al derecho de petición, por lo que no se comparte la(s) tesis invocada(s) por la Jueza de Distrito." (se transcriben)

2. Amparo en revisión 131/2009, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito

Origen. Se promovió juicio de amparo indirecto señalando como autoridad responsable al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro, al cual se le atribuyó violación al derecho de petición, puesto que mediante un escrito se hizo valer su oposición a la ejecución de la sentencia dictada por la responsable en un juicio reivindicatorio.

El Juez de Distrito, al dictar la sentencia, en el considerando segundo, en suplencia del error determinó que de la demanda de amparo se advertía que la quejosa aducía violación a lo previsto por el artículo 17 constitucional, no obstante en su demanda de amparo haya citado el diverso 8o., ya que el acto reclamado provenía de una autoridad jurisdiccional.

Luego, decretó el sobreseimiento en el juicio con fundamento en lo previsto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo; ya que de constancias de autos advirtió que no era cierto el acto reclamado, toda vez que al escrito presentado ante la autoridad responsable, recayó el acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil nueve; por tanto, previamente a la presentación de la demanda de amparo, ya se había emitido el acuerdo de contestación correspondiente.

En contra de tal determinación se interpuso el recurso de revisión, en el cual el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió el criterio contendiente que se precisa a continuación.

Criterio. En lo que interesa, el **Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito**, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO.—Los agravios formulados por las recurrentes, resultan ineficaces.

"...

"Los agravios sintetizados deben ser desestimados.

"Al formular sus motivos de inconformidad, las quejosas se basan e insisten en que el Juez responsable, vulneró su derecho de petición, previsto en el artículo 8o. constitucional.

"Sin embargo, este tribunal no comparte dicha apreciación inicial, pues se estima que el derecho a recibir una respuesta dentro de un procedimiento

judicial, adquiere características especiales, distintas de las que se presentan cuando el ciudadano acude ante cualquier otra autoridad.

"**El artículo 8o.** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: (se transcribe)

"Del análisis e interpretación del precepto constitucional que consagra el derecho público subjetivo de petición, se desprende que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante las autoridades, formulando una petición escrita, de manera pacífica y respetuosa. Ante esa petición que el gobernado presente, el Estado y sus autoridades, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud.

"Así pues, la garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional, se refiere de manera general, al derecho que tienen los gobernados de recibir una respuesta de la autoridad a la que dirigieron su petición.

"Por otra parte, el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, señala: (se transcribe)

"Este numeral, garantiza de manera específica en favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de promover la actividad jurisdiccional, para que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas; dejando al legislador ordinario la posibilidad de establecer los plazos y términos conforme a los cuales se instrumentará esa garantía relacionada con la administración de justicia.

"Lo anterior revela, que la Constitución establece de manera específica, la garantía de acceso a la justicia en el artículo 17 constitucional, misma que es oponible frente a la actividad jurisdiccional del Estado, y según la cual, los particulares deben observar los requisitos, formas y procedimientos que establezcan las leyes, al momento en que decidan acudir ante los tribunales.

"Así pues, cuando un particular acude ante una instancia jurisdiccional con la finalidad de promover alguna acción, procedimiento o medio de defensa, y no encuentra respuesta, no puede estimarse vulnerada la garantía general consagrada en el artículo 8o. constitucional, sino el derecho de acción o de acceso a la justicia, pues estos últimos están especialmente identificados y distinguidos en la Constitución y tienen sustancia propia.

"Con la finalidad de garantizar el debido acceso a la justicia consagrado constitucionalmente, las leyes establecen medios ordinarios de defensa en contra de las acciones y omisiones en que incurra un órgano jurisdiccional; por ende, cuando los particulares presentan un escrito o promoción ante una autoridad judicial, la garantía que pudiera encontrarse en riesgo de ser vulnerada, es la especialmente relacionada con el derecho de acceso a la justicia, prevista en el artículo 17 constitucional, y no la general, previsto en el artículo 8o.

"Por tal motivo, el hecho de que en la sentencia se haya considerado que la garantía que pudo haber sido vulnerada en contra de las quejosas, es la prevista en el artículo 17 constitucional, no causa agravios a las recurrentes.

"...

"Ahora bien, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que en sus agravios, las quejosas alegaron de manera insistente, que el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de Querétaro, sí había vulnerado su derecho de petición, porque el acuerdo de **3 de marzo de 2009**, emitido en respuesta a su escrito de oposición a la ejecución, no les fue notificado de manera personal, lo cual según dicen, impidió que conocieran dicho acuerdo con oportunidad para poder impugnarlo.

"Los referidos argumentos deben ser desestimados, pues parten de la premisa consistente en que el Juez responsable vulneró su derecho de petición; lo cual como ya se dijo, resulta inexacto, ya que en todo caso, la garantía que la autoridad jurisdiccional responsable pudo haber vulnerado, fue la de acceso a la justicia o debido proceso legal.

"Tomando en cuenta dicha distinción, este tribunal no puede atender los argumentos relacionados con la legalidad o ilegalidad del contenido del acuerdo del tres de marzo de dos mil nueve o de su notificación, ya que en todo caso, esos temas tienen que ver con posibles violaciones al debido acceso a la justicia o al debido proceso legal; derechos estos últimos que deben hacerse valer vía los medios ordinarios de defensa que proceden en contra de las acciones y omisiones en que incurra un órgano jurisdiccional.

"Esto es así, pues no sería jurídicamente admisible que un particular pueda eludir las reglas previamente establecidas para los procedimientos jurisdiccionales en que se encuentra inmerso, por el solo hecho de argumentar en una demanda de garantías violación al derecho de petición, obligando al Juez de amparo a analizar cualquier resolución emitida por la autoridad jurisdicción, junto con su notificación, ignorando los medios que el legislador puso

al alcance de los particulares para combatir las acciones y omisiones de ese tipo de autoridades.

"Así pues, se coincide con el Juez de Distrito en el sentido de que al momento de la presentación de la demanda de garantías, la omisión atribuida a la autoridad responsable no existía, pues ya se había dictado un acuerdo que recayó al escrito de las quejosas y éste había sido notificado. Si las inconformes no se encuentran de acuerdo con dichas actuaciones, entonces deben acudir a impugnarlas en la vía que consideren procedente, pues la litis del presente juicio de amparo, sólo era determinar si existía o no la omisión atribuida a la responsable, y no analizar la legalidad de sus actuaciones (acuerdo de 3 de marzo de 2009 y notificación), mismas que no fueron señaladas como actos reclamados en la demanda de garantías.

"Cabe precisar que el Código de Procedimientos Civiles de la entidad, no sólo permite la posibilidad de que un tercero, aduciendo derecho propio, acuda al juicio a intentar excluir los derechos del actor y demandado (derecho que las quejosas hicieron valer); sino que también establece la posibilidad de promover recursos en contra de las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales, tales como autos y notificaciones. …"

3. Amparo directo 408/2006, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Origen. El quejoso presentó demanda de amparo directo en contra de la sentencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil seis, que recayó al recurso de apelación 4393/2006, emitida por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en la que se sobreseyó en el juicio contencioso, pues ya se había dado respuesta a la petición de inscripción de testimonio presentada ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.

Criterio. En lo que al tema interesa, el **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO.— … Procediendo al estudio de los argumentos formulados en el único concepto de violación, es menester precisar que la petición que se encuentra contenida en el escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil cinco, presentado por el quejoso en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, el veintiuno de julio de dos mil cinco, registrada bajo el número **********, no constituye propiamente una petición conforme al artículo 8o.

constitucional, sino más bien, a una solicitud que planteó el quejoso al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, conforme al artículo 36 del reglamento de dicha institución.

"...

"De la transcripción anterior se desprende claramente que la solicitud que dirigió el quejoso, al director general del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, estriba medularmente, en que gire sus instrucciones a fin de que se lleve a cabo la inscripción del testimonio de la escritura **********, otorgada en el protocolo de la notaría a su cargo, conforme al artículo 36 del citado reglamento, toda vez que presume que se cumplieron todos los requisitos para llevar a cabo la inscripción del testimonio de tal escritura.

"En consecuencia, no le asiste razón al quejoso al precisar en su único concepto de violación, que mediante dicho escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil cinco, haya ejercido sólo su derecho de petición, conforme al artículo 8o. constitucional, porque lo que presentó al Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, fue la solicitud de que inscribiera la escritura, número ********** del protocolo de su notaría, con fundamento en el artículo 36 del reglamento de dicha institución.

"Así las cosas, **es evidente que si bien es cierto, como lo aduce el quejoso, que conforme al artículo 8o. constitucional**, respecto de toda petición planteada a las autoridades demandadas, éstas tienen la obligación de dar contestación y dárselas a conocer a los peticionarios de manera personal; también lo es, que en la especie, el quejoso no planteó una petición con fundamento en ese precepto, sino una solicitud conforme al artículo 36 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, por lo que la notificación de la respuesta a la misma, deberá sujetarse a las disposiciones de ese reglamento.

"De ahí, que también resulte infundado lo que aduce el quejoso, en cuanto a que la solicitud que planteó al Registro Público de la Propiedad, resulta independiente y autónoma respecto del procedimiento correspondiente a la solicitud de entrada y trámite de inscripción, de la escritura pública número **********, que inició previamente ante dicha autoridad, porque en el escrito que presentó el veintiuno de julio de dos mil cinco ante la autoridad administrativa, director general del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, solicitó la inscripción de la escritura número **********, es decir, de la misma escritura.

"Ahora bien, los argumentos que hace valer la quejosa, en su concepto de violación, relativos a que el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, porque indebidamente determinó revocar y sobreseer en el juicio bajo el argumento de que no existe el acto impugnado (silencio administrativo), son fundados, toda vez que se expresa con claridad la causa de pedir.

"…

"Lo anterior es así, toda vez que la Sala responsable en la sentencia reclamada, apoya sus consideraciones en la simple afirmación que hizo la autoridad demandada, tanto en su escrito de contestación a la demanda inicial, como en su recurso de apelación, en el sentido de que ya se dio contestación a la petición formulada por el quejoso; sin embargo, del análisis de las constancias de los autos del juicio contencioso, no se advierte documento alguno mediante el cual se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 98 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, que dice: (se transcribe)

"Así de un minucioso análisis del expediente administrativo **********, no se desprende que el director general del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, haya acreditado que dio contestación al quejoso, pues aun cuando señaló que mediante oficio, número **********, dio contestación, no lo adjuntó a su escrito de agravios, en la apelación, ni exhibió tampoco la gaceta respectiva del Boletín Registral, como se ordena en el artículo 36 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal.

"Por tanto, si derivado de la simple afirmación de la autoridad demandada, sin acreditarlo con medio probatorio alguno que había dado respuesta a la solicitud del quejoso, es incorrecta la sentencia reclamada en la que se concluye que no se había configurado el silencio administrativo de la autoridad administrativa demandada y por ende se debía sobreseer en el juicio contencioso principal **********; porque contrarió a esta afirmación al no haberse acreditado con medio probatorio alguno las simples afirmaciones del director general del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, se vulnera la garantía de seguridad jurídica al promovente del amparo.

"En consecuencia, al resultar fundados los argumentos analizados con antelación, procede conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra atendiendo los lineamientos de esta ejecutoria. …"

4. Amparo en revisión 27/2007, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Origen. Se promovió juicio de amparo indirecto, en contra de diversos actos, en la materia que a este asunto interesa, se reclamó la negativa por parte de la jefa delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Álvaro Obregón de dar contestación al escrito que le fue presentado. Seguidos los trámites de ley, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo solicitado bajo el argumento de que la autoridad señalada como responsable conculcó la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, por no dar contestación al escrito presentado. Inconforme con tal determinación la autoridad interpuso recurso de revisión.

Criterio. En lo que al tema interesa, el **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO.— … En cambio, resultan sustancialmente fundados los argumentos de agravio en que se aduce que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, por haberse dejado de valorar debidamente las pruebas aportadas por la responsable en su informe justificado correspondiente, ya que con la resolución de tres de mayo de dos mil cuatro, se acredita que a la quejosa se le dio oportuna respuesta a su petición.

"En efecto, del estudio íntegro del expediente que se analiza, se advierte que mediante oficio número ********** de fecha doce de marzo de dos mil cuatro (fojas ochocientos trece a ochocientos dieciséis), la jefa delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Álvaro Obregón, hizo del conocimiento de la quejosa **********, la rescisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, referente a los trabajos de conservación y mantenimiento a la carpeta asfáltica, dentro del perímetro delegacional, en virtud de existir incumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista contraídas mediante dicho contrato y no dar cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores y equipo de construcción, por lo que dificultaba la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en el contrato, según los antecedentes que se precisan en el oficio de mérito.

"Al efecto en dicho acuerdo, se precisó en lo conducente: (se transcribe)

"Este acuerdo le fue notificado a la quejosa, por oficio de fecha veintitrés de marzo de dos mil cuatro, según se aprecia al margen izquierdo superior del mismo oficio.

"En cumplimiento de lo anterior, el apoderado de la empresa quejosa **********, mediante escrito de fecha cinco de abril de dos mil cuatro (fojas ochocientos cuarenta y cinco a ochocientos cuarenta y ocho), dio contestación al requerimiento que le fue formulado por la autoridad responsable hoy recurrente, en el que expresó, medularmente lo siguiente: (se transcribe)

"Seguido el procedimiento de ley, la jefa delegacional en Álvaro Obregón, con fecha tres de mayo de dos mil cuatro, en el expediente ********** relativo al procedimiento de rescisión administrativa del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **********, consistente en trabajos de conservación y mantenimiento a la carpeta asfáltica, dentro del perímetro delegacional celebrado entre ese órgano administrativo y la persona moral quejosa en fecha catorce de enero de dos mil cuatro, dictó resolución en la que en el resultando décimo cuarto, precisó (fojas ochocientos sesenta y dos a ochocientos ochenta y seis): (se transcribe)

"Las documentales transcritas y precisadas con antelación, fueron aportadas por la propia quejosa, como pruebas de su parte, al expediente de amparo en copias certificadas por el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Álvaro Obregón, por lo que al tratarse de documentos públicos tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o.; en tal virtud, como bien lo aduce la recurrente, en el caso específico, contrariamente a lo considerado por la Juez Federal en la sentencia recurrida, no existe violación alguna al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Ello se estima así, pues si bien la quejosa en el escrito de fecha cinco de abril de dos mil cuatro, adujo: '… solicito en términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al resolver esta petición, lo haga favorablemente según los planteamientos que ahora se le hacen respetuosamente, señalando que hasta en tanto haya pronunciamiento ajustado a derecho, se validaría la entrega de la obra y cumplir en su exacta observancia los efectos que ello acarrea, por tanto, en estricto derecho, el contrato debe continuar vigente.'; lo cierto es que dicho ocurso fue presentado con motivo del requerimiento que se le formuló mediante el oficio número ********** de fecha doce de marzo de dos mil cuatro, en el que se otorgó un plazo de diez días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el procedimiento administrativo de rescisión del contrato de

obra pública a precios unitario y tiempo determinado número **********, celebrado entre el órgano político administrativo y la persona moral quejosa en fecha catorce de enero de dos mil cuatro, expediente número **********.

"Por ende, la autoridad responsable jefa delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Álvaro Obregón, no violó en forma alguna en perjuicio de la peticionaria del amparo garantía alguna, dado que, contrario a lo considerado por la juzgadora, no se encontraba obligada a dar respuesta en forma independiente y en breve término, al escrito de la quejosa de fecha cinco de abril de dos mil cuatro, pues dicho ocurso fue presentado con motivo de un requerimiento que se le formuló, tal como lo refiere en el mismo documento de cinco de abril de dos mil cuatro."

5. Amparo en revisión 18/2008, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Origen. Se promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Tercer Distrito, consistentes en la omisión de resolver respecto de la promoción presentada por las demandadas, ante dicho órgano, mediante la que solicitaron se corrigieran irregularidades en las que incurrió la autoridad agraria en el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas dentro del incidente de nulidad promovido; así como la resolución en la que se declara improcedente el incidente de nulidad. Una vez sustanciado el juicio, el Juez de Distrito determinó conceder el amparo respecto de unos actos y, por otros, negar el amparo solicitado. Inconforme con tal determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio. En lo que al tema interesa, el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito**, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO.— … Al respecto, este órgano colegiado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que se transcriben para su análisis: (se transcriben)

"Los textos legales que anteceden refieren la improcedencia del juicio de garantías cuando los actos que se reclaman no tienen una ejecución irreparable, entendiendo por tales aquellos que revisten la característica de que la afectación que producen dentro de un procedimiento, trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que

se encuentran la propiedad, la libertad, la vida o la integridad personal), y no sólo una consecuencia procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.

"Por lo anterior, no basta que se produzca un acto dentro de un juicio que provoque una posible violación, sino que es necesario, además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales que la Constitución General de la República tutela en favor de los gobernados, para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto.

"Luego, se consideran actos de imposible reparación, aquellos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna dada en el trámite y resolución del juicio.

"...

"Ahora bien, con la finalidad de realizar el análisis del acto que reclamaron las quejosas y que hicieron consistir en la omisión de la autoridad para proveer la promoción de nueve de mayo de dos mil siete, **es menester acudir al texto del artículo 8o. constitucional**, que establece: (transcribe)

"El precepto constitucional en cita establece la obligación de todos los servidores públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición y, por ende, pronunciar el respectivo acuerdo y darlo a conocer en los términos señalados.

"Empero, cuando la solicitud se presenta dentro de un procedimiento sujeto al cumplimiento de las formalidades procesales o sustantivas aplicables, su naturaleza se inserta como garantía individual a la impartición de justicia completa, pronta e imparcial, a que alude el artículo 17 de la Constitución General de la República, que en la parte que interesa establece: (se transcribe)

"En efecto, el artículo 17 de la Constitución, establece los lineamientos de la actividad de los tribunales quienes están obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes; cuestión que diferencia la petición formulada fuera de juicio, de la promoción que se efectúa dentro de un procedimiento jurisdiccional, porque en estos últimos, la autoridad debe

circunscribir su actuación a los términos y plazos que establecen las leyes, entendiendo por tales, las que regulan el procedimiento jurisdiccional, y no al breve término a que alude el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"De ahí que los actos que se reclaman de una autoridad jurisdiccional no se equiparan a la tutela de la garantía prevista en el mencionado artículo 8o., porque la autoridad no se encuentra obligada a dar respuesta en forma independiente, sino dentro de los lineamientos que rigen el procedimiento.

"...

"En este orden de ideas, es válido concluir que la omisión de resolver sobre la solicitud realizada con la finalidad de que se regularice el procedimiento, en relación con el ofrecimiento de las pruebas, no tiene repercusión en algún derecho fundamental y, por otra, la consecuencia que produce, consistente en la continuación del procedimiento, tampoco afecta en grado predominante o superior a las partes, que fuera tal que hiciera procedente, por excepción, su reclamación a través del juicio de amparo en vía indirecta; máxime que los efectos que la omisión reclamada produce, son susceptibles de repararse sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso en caso de que la sentencia definitiva le sea favorable. ..."

6. Amparo en revisión 272/2006, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Origen. Se promovió juicio de amparo indirecto contra el Servicio de Administración Tributaria, el administrador General de Aduanas, el administrador de la Aduana de Toluca y el subadministrador de la Aduana de Toluca, reclamando de dichas autoridades, en lo que interesa, la violación al derecho de petición consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el entonces quejoso presentó un escrito al cual anexó pruebas con las que, a su parecer, acreditó la legal estancia en el país de los vehículos materia del procedimiento administrativo de embargo, sin que la autoridad hubiera dictado determinación alguna en la que ordenara la devolución de los mismos.

Una vez sustanciado el juicio de amparo, la Juez de Distrito determinó, respecto de dicho acto, conceder el amparo solicitado. Inconforme con tal determinación, la autoridad interpuso recurso de revisión, en la que alegó

que en la sentencia se precisó que la solicitud que había realizado el quejoso se encuentra sujeta a lo previsto en el artículo 153 de la Ley Aduanera y no puede considerarse un escrito libre e independiente de dicho procedimiento.

Criterio. En lo que al tema interesa, el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito**, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO.— … En efecto, este Tribunal Colegiado estima que no es ajustado a derecho el criterio de la Jueza de Distrito, al conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, pues no se conculcó en perjuicio de la parte quejosa, lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución, ya que al ser parte en el procedimiento en el cual realizó la petición, la omisión que en su caso pudo existir, no se trata de una violación directa a la Constitución.

"Así es, tal como se dijo en párrafos precedentes, dichos agravios devienen fundados, ya que la Jueza de Distrito, pasa por inadvertido que el escrito presentado por **********, fue en un procedimiento administrativo regulado legalmente, en el caso, en materia aduanera, siendo parte reconocida en el mismo, razón por la cual, no es susceptible que ante la falta de contestación a su solicitud de levantamiento de embargo de los bienes que fueron embargados precautoriamente en dicho procedimiento y devolución propicie una vulneración a su derecho de petición, consagrado constitucionalmente a su favor por el artículo 8o., constitucional.

"En consecuencia, al ser el quejoso parte del procedimiento de origen, y reclamar en el juicio de amparo la transgresión al derecho de petición, es evidente, que no se puede (sic) estimarse que se violente directamente la garantía consagrada en el artículo 8o. de la Carta Magna, relativa al derecho a recibir una respuesta de la autoridad a la que se dirigió la petición.

"En efecto, la petición realizada en un procedimiento es el derecho de acción o, en su caso, el debido proceso legal, que son los géneros específicos del derecho de petición que, constitucionalmente están debidamente especificados y los cuales cuentan con su propia normatividad.

"…

"Es decir, al ser parte dentro del procedimiento, los argumentos tendientes a impugnar como violación directa, al artículo 8o. de la Constitución, resul-

tan inoperantes, pues no está en aptitud de hacer valer la existencia directa de dicha violación, sino en su caso como inexacta aplicación de la ley.

"En efecto, es evidente que en dicho supuesto, si la autoridad es omisa o bien, retarda la emisión del acuerdo o resolución correspondiente a la promoción formulada por una de las partes en un procedimiento seguido en forma de juicio, como resulta ser el previsto por la Ley Aduanera, a fin de verificar la legal estancia en el país de vehículos extranjeros, en todo caso, tiene a su alcance los medios ordinarios.

"Aunado a que, el precepto constitucional que pudiera ser vulnerado por el retardo en el procedimiento, ante la falta de emisión de una resolución pronta, completa e imparcial, será el artículo 17 constitucional, por la falta de expedites en la impartición de justicia, mas no una vulneración al derecho de petición, consagrado por el artículo 8o. constitucional como ilegalmente lo arriba la Jueza de Distrito. …"

7. Amparo en revisión 394/2005, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito

Origen. Se promovió juicio de amparo señalando como autoridad responsable al Juez Segundo Menor del Distrito Judicial de Veracruz, al que se le atribuyó como acto reclamado el auto de diecinueve de enero de dos mil cinco, por medio del cual desechó el incidente de incompetencia, así como el diverso recurso de apelación, interpuestos. El Juez de Distrito concedió el amparo al considerar que la resolución carecía de la debida fundamentación y motivación. Inconforme con lo anterior la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en el que –entre otras cosas– alegó que se violaba el principio de congruencia y exhaustividad, pues no dio respuesta a los argumentos en los que se hizo valer la transgresión al artículo 8o. constitucional.

Criterio. En lo que al tema interesa, el **Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito**, sostuvo lo siguiente:

"SÉPTIMO.—Por cuanto hace a los actos reclamados precisados bajo los incisos C) y D), del escrito de demanda de amparo consistentes en:

"'C) La violación del derecho de petición al dictar el ilegal auto de fecha diecinueve de enero del año dos mil cinco, que formulamos de manera respe-

tuosa, pacífica y por escrito de fecha veintisiete de agosto del año dos mil cuatro, mediante el cual promovimos incidente de nulidad de todo lo actuado ante el excusado Juez Octavo de Primera Instancia a partir del veintiuno de junio del año dos mil cuatro, sin que hasta la fecha lo hubiera acordado, pese a que fue recibido en la oficialía de partes el 31 de agosto del año dos mil cuatro conculcando nuestra garantía tutelada en el artículo 8o. de la Carta Magna.'

"...

"El **artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establece: (se transcribe).

"Del texto transcrito se advierte que, lo que se garantiza en este precepto es el derecho a recibir una respuesta de parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición.

"De ello se desprende que en este caso nos encontramos, no ante una abstención por parte del Estado, que caracteriza a gran parte de los derechos públicos subjetivos, sino frente a una obligación positiva que las autoridades deben cumplir.

"Esto es, asegura la comunicación que ha de existir entre los gobernados y las autoridades, previene que, en el marco de la ley y del respeto, las peticiones o instancias que formulen los sujetos activos de las garantías individuales sean atendidas de modo expeditivo por las autoridades del Estado, con miras a desvanecer la incertidumbre de la seguridad que, en la esfera jurídica, le corresponde a todo gobernado. Se trata, de una obligación positiva a cargo de las autoridades estatales, que deben decir si conocen o no lo solicitado y exponer razones y fundamentos para no dejar en la incertidumbre jurídica y en estado de indefensión al solicitante.

"Todas las gestiones que los particulares realicen frente a los órganos del Estado están protegidas por esta garantía individual. La disposición que se analiza es también el sustento genérico del derecho de acción procesal previsto en el artículo 17 de la Constitución que consiste en la posibilidad de hacer actuar a los órganos jurisdiccionales para que se pronuncie respecto de la aplicación de la ley a un caso concreto, trátese de un litigio o de una situación que deba ser definida jurídicamente, conforme a las reglas del procedimiento.

"Lo anterior quiere decir que en un proceso no se puede violar directamente el artículo 8o.; sino al derecho de acción o en su caso al debido proceso legal, que son los géneros específicos del derecho de petición que constitucionalmente están debidamente especificados, y los cuales cuentan con su propia normatividad; así en los juicios están establecidos los medios ordinarios de defensa en contra de sus acciones y omisiones en que incurra un órgano jurisdiccional, por ende, cuando se habla de una violación al derecho de petición dentro de un procedimiento, se tiene que especificar que se trata de una violación indirecta por inexacta aplicación de la ley; y como todo acto procesal dentro del procedimiento para ser motivo del juicio de amparo debe ser preparado, debiendo agotar los recursos ordinarios que tiendan a reparar esa violación; misma que si no se agota hará improcedente el juicio o inoperante el concepto de violación.

"Por tanto, en el caso que nos ocupa, los quejosos no pueden pretender que a través del juicio de amparo biinstancial, se analice si la autoridad jurisdiccional transgrede en su perjuicio el artículo 8o. constitucional, ya que, al ser parte en el juicio natural, tienen expedito su derecho para hacer notar al juzgador de origen, a través de los medios ordinarios correspondientes, la omisión en que pudiera incurrir con relación a determinada solicitud o petición.

"Lo anterior, en razón de que, en principio se dice que mediante el juicio de amparo, al ejercer el control de legalidad mediante el conocimiento jurisdiccional de los juicios de amparo, se salvaguardan las garantías individuales dentro de las cuales se encuentra la legalidad, plasmada en el artículo 14 de la Carta Magna, complemento de esta garantía es la contenida en el artículo 16.

"Con lo anterior, se deduce que entre las garantías que se protegen mediante el juicio de amparo, son la exacta y debida interpretación de la ley en las resoluciones judiciales, así como que el juicio se siga de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento. Cuando en el juicio se persigue la correcta aplicación de las disposiciones referentes al caso, se habla de que se trata de una violación indirecta a la Constitución, en que se infringe alguna garantía individual como los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad o a las posesiones, a través de la inexacta aplicación de la ley o de un indebido proceso legal.

"Luego entonces, si los quejosos, al ser parte del procedimiento de origen, reclaman violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. de

la Carta Magna, debe estimarse que jurídicamente resulta inadmisible que se pueda violar directamente ese artículo, sino el derecho de acción o en su caso al debido proceso legal, que tienen su normatividad bajo la cual se rigen; de ahí que se esté ante la presencia de una violación indirecta a la Constitución por inexacta aplicación de la ley y en su consecuencia debió ser preparado dentro del procedimiento o agotarse los recursos que existan para impugnarse en amparo, bajo el riesgo de que sean inoperantes los argumentos que se expresen o resulte improcedente el amparo.

"Caso contrario sería en el supuesto de que los quejosos tuvieran el carácter de terceros extraños al procedimiento ordinario, reclamando violación al derecho de petición, pues en esta hipótesis, se estaría ante la presencia de una violación directa a la garantía constitucional consagrada en el artículo 8o. que se protege a través del juicio de amparo; de ahí la inoperancia de los argumentos que hacen valer los quejosos como conceptos de violación, pues al perseguir la correcta aplicación de las disposiciones legales al caso, como partes actuantes dentro del procedimiento de origen, no resulta procedente que a través del juicio de amparo se analice la omisión al artículo constitucional en comento, pues el juicio constitucional se rige por los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna. …"

CUARTO.—**Existencia de la contradicción.** De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",[2] puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

---

[2] Publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76.

Así, la finalidad que persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está contenida en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente; de los cuales se desprende una facultad para unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados –o las Salas de la Corte, en su caso– llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.

En ese sentido, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra dicen:

"Novena Época
"Registro: 165077
"Instancia: Primera Sala
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXXI, marzo de 2010
"Materia: común
"Tesis: 1a./J. 22/2010
"Página: 122

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada insti-

tución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

"Contradicción de tesis 124/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Miguel Enrique Sánchez Frías, Roberto Lara Chagoyán y Raúl Manuel Mejía Garza.

"Contradicción de tesis 123/2009. Suscitada entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia del Séptimo Circuito. 9 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

"Contradicción de tesis 168/2009. Suscitada entre el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 9 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

"Contradicción de tesis 262/2009. Suscitada entre el Cuarto y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 9 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

"Contradicción de tesis 235/2009. Entre los criterios sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito. 23 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

"Tesis de jurisprudencia 22/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de diez de febrero de dos mil diez."

"Novena Época
"Registro: 165076
"Instancia: Primera Sala
"Tesis: jurisprudencia

"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXXI, marzo de 2010
"Materia: común
"Tesis: 1a./J. 23/2010
"Página: 123

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.'. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto 'contradictorio' ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

"Contradicción de tesis 124/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Miguel Enrique Sánchez Frías, Roberto Lara Chagoyán y Raúl Manuel Mejía Garza.

"Contradicción de tesis 123/2009. Suscitada entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y el Segundo

Tribunal Colegiado en la misma materia del Séptimo Circuito. 9 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert.

"Contradicción de tesis 168/2009. Suscitada entre el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 9 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

"Contradicción de tesis 262/2009. Suscitada entre el Cuarto y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 9 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo.

"Contradicción de tesis 235/2009. Entre los criterios sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito. 23 de septiembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

"Tesis de jurisprudencia 23/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de diez de febrero de dos mil diez.

"Notas: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 36/2007-PL citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 293.

"La tesis P./J. 26/2001 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76."

En esas condiciones, en la especie sí se cumplen los requisitos analizados, ya que los Tribunales Colegiados, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones detalladas en el considerando tercero de la presente resolución, en las que se analizó una cuestión específica: determinar si dentro del juicio de amparo, la parte quejosa puede alegar la violación al derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional cuando se encuentre dentro de juicio o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

En efecto, de la lectura de las ejecutorias se desprende que los órganos jurisdiccionales resolvieron tanto amparos directos como indirectos, en los que se cuestionó la omisión por parte de la autoridad de dar respuesta a una petición formulada, tanto dentro de un procedimiento jurisdiccional, como de uno seguido en forma de juicio; por lo que los tribunales se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial para realizar una interpretación, respecto de los alcances del artículo 8o. constitucional en los procedimientos jurisdiccionales, tanto formales como materiales; sin que pueda considerarse un obstáculo el hecho de que los procedimientos tengan naturalezas jurídicas distintas, ya que el ejercicio interpretativo partió del artículo 8o. constitucional y no de las características específicas de cada uno de dichos procedimientos.

Por lo que hace al **segundo requisito** relativo al punto de toque y diferendo de criterios interpretativos, esta Primera Sala considera, que de la lectura de los aspectos destacados en las ejecutorias mencionadas en los párrafos anteriores, se desprende que la interpretación realizada por los órganos colegiados contendientes versó sobre un mismo problema jurídico: determinar si la garantía prevista en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser violada durante un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional, cuyas características resultan ser similares. No obstante lo anterior, la conclusión a la que arribaron no fue en el mismo sentido jurídico, pues:

• **El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito**, estimó en el amparo en revisión 60/2014, que el cumplimiento del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resultaba exigible con independencia de que los ciudadanos se encontraran dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues la transgresión a dicho artículo podía considerarse aislada y directa, y que el hecho de que en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, establezca específicamente la garantía de acceso a la justicia, según la cual, los particulares deben observar los requisitos, forma y procedimiento de la autoridad jurisdiccional que resuelva sus pretensiones, ello no resulta aplicable, cuando no se contesta alguna petición hecha valer dentro de un procedimiento, pues incluso los medios de defensa ordinarios en dichos procedimientos no podrían hacerse valer, pues éstos no proceden en contra de omisiones. Por esas razones, el juicio de amparo indirecto era procedente en contra de actos dictados dentro de ejecución de sentencia, cuando se invoca la violación al artículo 8o. constitucional.

• **El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito**, contrario a lo antes expuesto, sostuvo en el amparo en revisión 131/2009,

que el juicio de amparo indirecto no era procedente cuando se reclamara la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de la etapa de ejecución de un juicio reivindicatorio, pues el artículo 17 constitucional, garantiza de manera específica, a favor de los gobernados, el acceso efectivo a la justicia; de manera que, cuando un particular acude ante una instancia jurisdiccional con la finalidad de promover alguna acción, procedimiento o medio de defensa y no encuentran respuesta, no puede estimarse vulnerada la garantía general consagrada en el artículo 8o. constitucional, sino el derecho de acción y acceso a la justicia, ya que éstos están especialmente identificados y distinguidos en la Constitución y tienen sustancia propia.

• En ese mismo sentido, el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito**, al resolver el amparo en revisión 18/2008, señaló que el juicio de amparo era improcedente en contra de actos dictados dentro de procedimiento, sin que fuera obstáculo que se alegara la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de todos los servidores públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, pronunciar el respectivo acuerdo y darlo a conocer en los términos señalados; sin embargo, si la solicitud se presenta dentro de un procedimiento sujeto al cumplimiento de las formalidades procesales aplicables, su naturaleza se inserta en la garantía individual prevista en el artículo 17 constitucional; de ahí que los actos que se reclaman a una autoridad jurisdiccional no se equiparan a la tutela de la garantía prevista en el referido numeral 8o., porque la autoridad no se encuentra obligada a dar respuesta en forma independiente, sino dentro de los lineamientos que rigen el procedimiento.

• Por otro lado, el referido **Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito**, dentro del amparo en revisión 394/2005, sostuvo al analizar el fondo del asunto, que el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho a recibir una respuesta de parte de la autoridad a la que se ha dirigido la petición; asimismo, que en un proceso no se puede violar directamente dicho precepto, sino el derecho de acción o en su caso el debido proceso legal, que son los géneros específicos del derecho de petición que constitucionalmente están debidamente especificados y los cuales cuentan con su propia normatividad, de manera que cuando el particular es parte en un procedimiento es inadmisible que se pueda violar directamente el referido artículo 8o.

• De esa misma forma, en el fondo del asunto, el **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, al resolver el amparo

directo 408/2006 consideró que la petición formulada por el quejoso a la autoridad (Registro Público de la Propiedad) no se había sustentado en el artículo 8o. constitucional, sino en el artículo 36 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, por lo que no resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 8o. constitucional.

• Aunado a ello, dentro de amparos en revisión, se pronunciaron el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito**, al resolver el RP. 272/2006, en el que determinó que no era factible analizar la omisión de dar respuesta a una petición, conforme al artículo 8o. constitucional, cuando el particular estaba dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio como el procedimiento en materia aduanera, pues ello en su caso podría analizarse a partir del debido proceso o incluso conforme al artículo 17 constitucional. Igualmente, el **Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, al resolver el amparo en revisión 27/2007, consideró que la petición formulada por el quejoso, debía ser resuelta conforme a las reglas del procedimiento en el que se encontraba.

Con base en lo anterior, queda acreditada la existencia de la contradicción de tesis, pues los tribunales llegaron a conclusiones distintas, a partir de una interpretación que realizaron del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la respuesta que deben de dar las autoridades, cuando la petición se formula dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; situación que conlleva, de igual forma, a determinar si la transgresión a dicho artículo hace procedente el juicio de amparo indirecto.

Respecto del **tercer requisito**, relacionado con el surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción, debe decirse que los puntos de vista de los órganos reflejan contradicción en sus consideraciones y razonamientos, lo cual puede dar lugar a la formulación de las siguientes preguntas:

• ¿Puede reclamarse de manera autónoma la violación al artículo 8o. constitucional, cuando el particular se encuentra dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional que se rige por los derechos previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución?

• ¿Es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de omisiones de dar respuesta a peticiones formuladas dentro de procedimientos formal o materialmente jurisdiccionales?

QUINTO.—**Estudio del punto en contradicción.** Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Autonomía del reclamo de la violación al artículo 8o. constitucional en procedimientos de carácter formal o material

En primer lugar, se abordará el planteamiento consistente en determinar si es posible reclamar de manera autónoma e independiente la violación al artículo 8o. constitucional, cuando el particular se encuentra dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibe una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado, por lo que es claro que se trata de disposiciones constitucionales que rigen las relaciones entre gobernantes y gobernados, las cuales son aplicables en determinados contextos.

El artículo 8o. de la Norma Fundamental consagra de manera general el deber de todo funcionario y empleado público de contestar las peticiones de los gobernados, al señalar lo siguiente:

"**Artículo 8o.** Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."

Dicho precepto establece la obligación de los funcionarios y empleados públicos de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; de ahí que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

En relación con dicho precepto, es vasta la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se ha señalado, que el derecho de petición implica la obligación correlativa a cargo de la autoridad de

dictar el acuerdo correspondiente a la solicitud elevada y de darla a conocer en breve término al peticionario, siendo que éste debe señalar el domicilio en que se deba notificar tal solicitud; asimismo, que el referido derecho está reconocido exclusivamente frente a las autoridades, esto es, en las relaciones entre gobernantes y gobernados, lo que excluye su operatividad en las relaciones de coordinación, reguladas por el derecho privado, en el que el ente público actúa como particular.

De igual forma, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan preceptos constitucionales, como los artículos 14 y 16; el primero, dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal. En específico, el primero, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo numeral, en su parte inicial, consagra la garantía de legalidad, tal como se advierte de la siguiente transcripción:

"**Artículo 14.** A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. …"

"**Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. …"

En relación con la garantía de debido proceso, debe señalarse que la misma resulta aplicable a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, ya sea formal o material –puesto que ésta permite que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, tal como se desprende de la tesis jurisprudencial 2a./J. 16/2008–.[3]

[3] Tesis jurisprudencial 2a./J. 16/2008, registro digital: 170392, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 497, cuyo rubro es: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO

En ese sentido, la autoridad que emita el acto deberá cumplir con esas "formalidades esenciales del procedimiento" a efecto de garantizar la adecuada defensa del gobernado. Al respecto el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 47/95, cuyo rubro es: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.",[4] ha sostenido, que ese respeto por parte de las autoridades a la garantía de audiencia se alcance, de manera genérica, cuando: i) se notifica el inicio del procedimiento; ii) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii) se da oportunidad de alegar; y iv) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas.[5]

Asimismo, debemos destacar lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa dispone:

"**Artículo 17.** Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales …"

PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES."

[4] Tesis jurisprudencial P./J. 47/95, registro digital: 200234, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133.

[5] Ambas Salas de este Alto Tribunal han hecho importantes precisiones respecto a la cuarta de las formalidades esenciales, es decir, emisión de la resolución. La Primera Sala señaló que la impugnación de sentencias también se considera dentro de dichas formalidades, mientras que la Segunda Sala sostuvo que para que una resolución garantice la tutela jurisdiccional efectiva debe cumplir con los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ver la tesis aislada 1a. LXXVI/2005, registro digital: 177539, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 299. Amparo directo en revisión 166/2005, cuyo rubro es: "PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO.", y la tesis jurisprudencial 2a./J. 192/2007, registro digital: 171257, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES."

El precepto transcrito tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones.

De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción (especie del derecho de petición), conforme al cual, el gobernado tiene el derecho y el gobernante, la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea.

En relación con el precepto analizado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el derecho de acceso a la justicia, como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; asimismo, se destacaron respecto de las autoridades jurisdiccionales, los siguientes principios:

1. Justicia pronta: Obligación de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, de resolver las controversias que se planteen ante ellas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes.

2. Justicia completa: Consiste en que la autoridad que conozca de la controversia planteada **emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, así como que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, aplicando la ley, resuelva si le asiste razón o no, sobre los derechos que ha considerado afectados** en su perjuicio.

3. Justicia imparcial: La autoridad jurisdiccional debe emitir una resolución, que además de que se encuentre apegada a derecho, no dé lugar a favoritismos respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

4. Justicia gratuita: Los órganos jurisdiccionales, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda la impartición de justicia, no deben

cobrar a las partes en controversia emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

Cabe resaltar, que también se ha referido que la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, y, uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia.

En congruencia con tales afirmaciones, esta Primera Sala emitió la siguiente tesis de rubro y texto:

"Novena Época
"Registro: 172517
"Instancia: Primera Sala
"Tesis: aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXV, mayo de 2007
"Materia: constitucional
"Tesis: 1a. CVIII/2007
"Página: 793

"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.—El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional –como las de prontitud y expedites– y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la

garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente.

"Amparo directo en revisión 1681/2006. **********. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Constanza Tort San Román."

De esa forma, cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas.

Así, uno de los cuestionamientos que se resuelven en la presente contradicción, consiste en determinar si es posible que el particular reclame de forma autónoma el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, cuando el particular está dentro de un procedimiento material y/o formalmente jurisdiccional.

De manera preliminar, es factible concluir que no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, **debe atenderse al que regula de manera integral su situación**.

En esas condiciones, como ya se precisó, el derecho de petición regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del particular, con la finalidad de obtener una respuesta, pero de forma específica los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante peticiones de los particulares, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, **ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad**.

Así, el derecho como género previsto en el artículo 8o. constitucional pretende que a la petición hecha ante una autoridad le recaiga una respuesta en breve término; en cambio, el artículo 14, así como el 17 constitucionales,

prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado.

Por tanto, los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que, –al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones– realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad; tal como también lo dispone el artículo 8o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho de acceso efectivo a la justicia).

Lo anterior, habida cuenta que el debido proceso y el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, abren la posibilidad legal de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que le es sometida a su conocimiento de forma congruente y completa, la que constituye el objeto del proceso. Dicho de otra manera, si dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional se ejerce el derecho de acción, el desarrollo de dicho proceso se sujeta a los plazos y términos que rigen el mismo, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones.

En efecto, si el gobernado dentro de un procedimiento material o formalmente jurisdiccional promueve o insta al órgano del conocimiento para que resuelva una petición sometida a su consideración, su proceder debe regirse por los derechos al debido proceso y el derecho de acción de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues atendiendo a dichos derechos es que el particular puede **obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas de forma íntegra**, generando a su vez los deberes positivos y negativos desarrollados en párrafos anteriores, es decir, el que la conducta se rija por dichos artículos, permite al particular obtener una mejor respuesta a sus pretensiones y, por ende, una mayor protección, puesto que el derecho de petición sólo obliga a la obtención de una respuesta básica.

Además, no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la respuesta completa a las solicitudes de los particulares, sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales, ya que esta Suprema Corte

ha sido consistente al considerar que los derechos que conforman la tutela jurisdiccional efectiva alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, debiéndose atender a la naturaleza del asunto que se resuelva. Al respecto, resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 192/2007, cuyo rubro y texto son:

"Novena Época
"Registro: 171257
"Instancia: Segunda Sala
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXVI, octubre de 2007
"Materia: constitucional
"Tesis: 2a./J. 192/2007
"Página: 209

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.—La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que

las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

"Amparo directo en revisión 980/2001. **********. 1o. de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

"Amparo directo en revisión 821/2003. **********. 27 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

"Amparo en revisión 780/2006. **********. 2 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava.

"Amparo directo en revisión 1059/2006. **********. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro.

"Amparo en revisión 522/2007. **********. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

"Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete.

"Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el presente criterio."

Ahora bien, el hecho de que los artículos que rigen la situación del particular sean distintos y no puedan reclamarse por los accionantes, no justifica que la autoridad no esté vinculada a lo dispuesto en el artículo 8o. constitucional, en cuanto a su obligación de hacer saber a los solicitantes o peticionarios, en un lapso corto, todos los trámites y acciones llevadas a cabo en relación con sus peticiones, pues de conformidad con los principios

de universalidad e interdependencia las autoridades deben resolver las situaciones de los particulares entendiendo los derechos como un todo; para lo cual, es necesario recordar el texto del párrafo tercero del artículo primero constitucional, el cual señala:

"Artículo 1o.

"...

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

En dicho párrafo se incorporaron distintas hipótesis normativas respecto de la aplicación de los derechos humanos, la primera, referente a la vinculación de las autoridades en el cumplimiento de los derechos humanos, al imponerles cuatro obligaciones básicas que se traducen en la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, las cuales deben cumplir en el ámbito de sus competencias. En la segunda hipótesis, se prevé la forma de aplicación de los derechos humanos, al establecer que debe realizarse a partir de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad; asimismo, en la tercera, una obligación de control para las autoridades, ante el incumplimiento de los derechos humanos, las cuales consisten en investigar, prevenir, reparar y sancionar.

En la especie, resulta conveniente referirnos a la segunda hipótesis consistente en la observancia de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad para la aplicación de los derechos humanos, en específico, el segundo y tercero de los principios, en virtud de que cualquier autoridad que deba aplicar derechos debe tomar en cuenta su carácter integral.

En efecto, de conformidad con lo que establece el artículo 1 constitucional, en el ordenamiento jurídico mexicano, los derechos humanos conforman hipótesis jurídicas de la misma jerarquía que giran alrededor de un fin común: el bienestar de la persona; motivo por el cual estos derechos están relacionados entre sí y no es factible invocar uno sobre otro, ni condicionar su eficacia, lo cual conlleva a una aplicación asimétrica de los derechos.

Asimismo, estos principios que obligan a las autoridades a concebir los derechos como una unidad y aplicarlos de forma indivisible e interdependiente, se encuentran implícitamente contenidos en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como en los preámbulos tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de mil novecientos sesenta y seis, en los siguientes términos:

Declaración Universal de Derechos Humanos

"Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad."

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

"**Preámbulo**

"Los Estados partes en el presente pacto

"Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

"Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

"Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen **condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales**,

"Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

"Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este pacto, …"

"**Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**

"**Preámbulo**

"Los Estados partes en el presente pacto, considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

"Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana,

"Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones **que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos**,

"Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

"Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este pacto, …"

De igual forma en la resolución 32/130 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y siete, se obliga a las naciones a prestar la misma atención y urgente consideración tanto a la aplicación, la promoción y la protección de todos los derechos. Igualmente, en el párrafo quinto, de la parte I, de la Declaración y el Programa de Acción de Viena de mil novecientos noventa y tres se estableció la obligación para la comunidad internacional de tratar a los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.

En ese sentido, los principios consagrados en el artículo 1o. constitucional, obligan a todas las autoridades –en el ámbito de sus competencias– a aplicar los derechos de forma indivisible e interdependiente, para lo cual deben concebir los derechos no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía, por lo que las autoridades deben hacer respetar los derechos, desde las diferentes categorías en las que se encuentren, de manera simultánea y teniendo en cuenta a la vez las interacciones y las diferencias de su naturaleza. Asimismo, las autoridades deben relacionar los derechos y concebir que dependen recíprocamente unos de otros, por lo que no es aceptable relegar algunos de ellos con la finalidad de conceder prioridad a otros.

De esa forma, esta Primera Sala considera que la obligación principal que se deriva de la observancia de los principios de indivisibilidad e interdependencia, radica en analizar los derechos humanos como un todo, encaminados a un fin común. Dicha perspectiva se conjuga con las prohibiciones de no invocar un derecho sobre otro, así como de no condicionar la eficacia de uno bajo el pretexto de la protección del otro; sin que dicha actividad, como se ha precisado con anterioridad, implique desconocer que los derechos se encuentran construidos para la protección de ciertas circunstancias, por lo que no podría aceptarse una radical y absoluta equiparación de los derechos humanos que obligue a percibirlos de forma uniforme.

En esas condiciones, los derechos consagrados en los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), sin embargo deben entenderse de manera armónica de acuerdo a su finalidad, sin que ello implique dejar de proteger al particular frente al acto de autoridad.

Así, de conformidad con los principios de indivisibilidad e interdependencia, la autoridad debe verificar el cumplimiento de los derechos y las correlativas obligaciones, en el contexto de lo que establecen los artículos 8o., 14 y 17 constitucionales; por tanto, de una interpretación armónica se desprende la obligación de la autoridad jurisdiccional o administrativa de emitir la resolución correspondiente a la petición presentada de manera pronta y congruente, la cual debe atender a los plazos y términos fijados en las leyes que rigen dicho procedimiento.

Entonces, si bien resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de forma autónoma la transgresión reclamada en relación con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (derecho de petición), cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público

dentro de un juicio o dentro de un procedimiento materialmente jurisdiccional e incluso, cuando la autoridad sea parte en el procedimiento, puesto que las reglas que rigen ese tipo de procedimientos son las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, ello no impide que conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia, la autoridad esté obligada a analizar los derechos de forma armónica y como una unidad, para resolver de mejor forma el planteamiento que formula el particular.

A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los procedimientos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio se rigen conforme a los plazos y términos establecidos en las leyes secundarias, ya que mediante la actividad legislativa ordinaria se logra una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de lo previsto en los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional.

Esto es, a través de la legislación secundaria se realiza el desarrollo, inclusive ampliación, a favor de los habitantes del país, de los preceptos que consagran los derechos fundamentales, ejercicio que debe realizarse sin anular esos derechos, sino que por el contrario, debe desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó.

Por tanto, ante la existencia de una norma secundaria que desarrolla de mejor forma la obligación de respuesta de las autoridades, no es dable que se impugne su violación de manera autónoma, ya que el plazo, términos y modalidades bajo los cuales se regirá el actuar de la autoridad ante la cual se elevó la petición, serán conforme lo establecido por la norma secundaria, y la autoridad deberá verificar en todo momento que se atienda de la mejor forma posible la solicitud del particular. De estimar lo contrario, podría suceder que la contestación, aun cumpliendo con los lineamientos constitucionales, no resuelva de mejor forma lo planteado, por no actuar conforme a la legislación ordinaria.

Así, la transgresión al artículo 8o. constitucional, no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, ni legales, cuando el particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regulan la referida situación.

Procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de dar respuesta a peticiones formuladas dentro de procedimientos formal o materialmente jurisdiccionales

Ahora bien, una vez resuelto el primer planteamiento, a través del cual se determinó que cuando un particular se encuentre dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, no puede reclamar de forma autónoma la violación al derecho de petición, en virtud de que debe atenderse a lo previsto en las normas constitucionales y legales aplicables; lo procedente es determinar, si conforme a dicha premisa resulta procedente el amparo indirecto en contra de la omisión de dar respuesta a una petición formulada dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio.

Así, es conveniente precisar que la presente contradicción se origina en asuntos que fueron resueltos conforme a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, por lo que conviene destacar el texto del artículo 114, fracciones II, III y IV, de la abrogada Ley de Amparo, el cual dispone:

"**Artículo 114.** El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

"En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.

"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

"Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio.

"Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; ..."

De lo transcrito se advierte que en los procedimientos jurisdiccionales, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional, en contra de actos dictados dentro del procedimiento, cuando tengan el carácter de "*imposible reparación*"; o en aquellos casos en los que el quejoso hubiese quedado sin defensa o hubiese sido privado de los derechos que la ley de la materia le conceda.

Asimismo, en la contradicción de tesis 215/2009, resuelta por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que dicha aplicación por analogía permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes.

Por tanto, la interpretación a lo previsto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, es en el sentido de que existe la posibilidad de impugnar actos dictados dentro del procedimiento de ejecución exclusivamente cuando: **a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia**, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable, las anteriores consideraciones se encuentran en la tesis P./J. 108/2010, de rubro y texto siguientes:

"Novena Época
"Registro: 163152

"Instancia: Pleno
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXXIII, enero de 2011
"Materia: común
"Tesis: P./J. 108/2010
"Página: 6

"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.—La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto."

También, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 4/2001, sostuvo que las violaciones procesales son impugnables ordinariamente, vía amparo directo, al reclamarse la sentencia definitiva, pero de modo excepcional, pueden reclamarse vía amparo indirecto, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior:

"Novena Época
"Registro: 190368
"Instancia: Pleno
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XIII, enero de 2001
"Materia: común
"Tesis: P./J. 4/2001
"Página: 11

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.—Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del *Semanario Judicial de la Federación*, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.', para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las

partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo.

"Contradicción de tesis 50/98-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de enero en curso, aprobó, con el número 4/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de enero de dos mil uno.

"Nota: Por ejecutoria del dieciocho de marzo de dos mil catorce, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito declaró improcedente la solicitud de sustitución de jurisprudencia 1/2013 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis."

Conforme al referido criterio, para que se actualice la excepción antes apuntada, es necesario que la violación formal se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impidan en forma actual, el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva.

En esas condiciones, cabe recordar que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria; en razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso.

Lo anterior, pues **no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación** ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.

No pasa inadvertido para esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo.

En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter obligatorio, en los términos del artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el criterio contenido en las tesis siguientes:

DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria.

No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento.

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "**imposible reparación**"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Existe contradicción entre el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 60/2014 de su índice; y, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 408/2006 y el amparo en revisión 27/2007, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 131/2009, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisión 18/2008 y 272/2006 y, finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 394/2005.

SEGUNDO.—Deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, las tesis de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto quedaron anotados en el último considerando de la presente ejecutoria.

TERCERO.—Dése publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en los términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que se refiere a la competencia y, unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "*imposible reparación*"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condicio-

nes, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada.

1a./J. 8/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 130/2014. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 21 de enero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 60/2014, originó la tesis VI.1o.C.1 CS (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO DE PETICIÓN. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES SE ENCUENTRAN VINCULADAS A SU CUMPLIMIENTO.", publicada el viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 812, con número de registro digital 2008125; el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 408/2006 y el amparo en revisión 27/2007, dieron origen a la tesis aislada número I.5o.A.59 A, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SI LA SOLICITUD RESPECTIVA SE PRESENTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PROCESALES O SUSTANTIVAS APLICABLES, AQUÉLLA NO SE EQUIPARA A LA QUE TUTELA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 2085, con número de registro digital 172543; el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 131/2009, dio origen a la tesis aislada número XXII.2o.10 K, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE

PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1343, con número de registro digital 166252; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 18/2008, dio origen a la tesis aislada con número II.1o.A.38 K, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. NO ES APLICABLE LA TUTELA DE DICHA GARANTÍA RESPECTO DE PROMOCIONES PRESENTADAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES ADJETIVAS O SUSTANTIVAS LEGALMENTE PREVISTAS.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 2680, con número de registro digital 168159 y la tesis II.1o.A.39 K, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR UNA PROMOCIÓN RELATIVA AL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, SI EL QUEJOSO LA HACE VALER EN SU DEMANDA COMO TRANSGRESIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE, EN SU CASO, DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA DIRECTA.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 2636, con número de registro digital 168223 y el amparo en revisión 272/2006, que dio origen a la tesis aislada número II.1o.A.134 A, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. NO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN DIRECTA A ESA GARANTÍA CUANDO SE CONTROVIERTE LA FALTA O EL RETARDO EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS EMBARGADOS POR LA AUTORIDAD ADUANERA, SI EL PARTICULAR ES PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO Y TIENE A SU ALCANCE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ORDINARIOS CONTRA LAS ACCIONES U OMISIONES DE AQUÉLLA.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1695, con número de registro digital 172779; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 394/2005, que dio origen a la tesis aislada número VII.2o.C.21 K, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FORMULADOS CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA TRANSGRESIÓN DIRECTA A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL, SIENDO PARTE FORMAL EN EL PROCEDIMIENTO NATURAL.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1989, con número de registro digital 175613.

Tesis de jurisprudencia 8/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.

El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las

pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento.

1a./J. 7/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 130/2014. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 21 de enero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 60/2014, originó la tesis VI.1o.C.1 CS (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO DE PETICIÓN. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES SE ENCUENTRAN VINCULADAS A SU CUMPLIMIENTO.", publicada el viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 812, con número de registro digital 2008125; el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 408/2006 y el amparo en revisión 27/2007, dieron origen a la tesis aislada número I.5o.A.59 A,

de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SI LA SOLICITUD RESPECTIVA SE PRESENTA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES PROCESALES O SUSTANTIVAS APLICABLES, AQUÉLLA NO SE EQUIPARA A LA QUE TUTELA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 2085, con número de registro digital 172543; el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 131/2009, dio origen a la tesis aislada número XXII.2o.10 K, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO DE PETICIÓN. SU REGULACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 8o. Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1343, con número de registro digital 166252; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 18/2008, dio origen a la tesis aislada con número II.1o.A.38 K, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. NO ES APLICABLE LA TUTELA DE DICHA GARANTÍA RESPECTO DE PROMOCIONES PRESENTADAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES ADJETIVAS O SUSTANTIVAS LEGALMENTE PREVISTAS.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 2680, con número de registro digital 168159 y la tesis II.1o.A.39 K, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR UNA PROMOCIÓN RELATIVA AL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, SI EL QUEJOSO LA HACE VALER EN SU DEMANDA COMO TRANSGRESIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE, EN SU CASO, DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA DIRECTA.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 2636, con número de registro digital 168223 y el amparo en revisión 272/2006, que dio origen a la tesis aislada número II.1o.A.134 A, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. NO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN DIRECTA A ESA GARANTÍA CUANDO SE CONTROVIERTE LA FALTA O EL RETARDO EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS EMBARGADOS POR LA AUTORIDAD ADUANERA, SI EL PARTICULAR ES PARTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO Y TIENE A SU ALCANCE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ORDINARIOS CONTRA LAS ACCIONES U OMISIONES DE AQUÉLLA.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1695, con número de registro digital 172779; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 394/2005, que dio origen a la tesis aislada número VII.2o.C.21 K, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FORMULADOS CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA TRANSGRESIÓN DIRECTA A ESA GARANTÍA INDIVIDUAL, SIENDO PARTE FORMAL EN EL PROCEDIMIENTO NATURAL.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1989, con número de registro digital 175613.

Tesis de jurisprudencia 7/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUTORIAS Y TESIS
QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA

Subsección 1.
TESIS AISLADAS Y, EN SU CASO, EJECUTORIAS

CONSTITUCIÓN. SU CONCEPCIÓN COMO NORMA JURÍDICA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido construyendo la doctrina de que la Constitución es, ante todo, una norma jurídica. Tal situación implica el reconocimiento de las siguientes premisas: (i) en primer término, todo el contenido de la Constitución tiene un valor normativo inmediato y directo, teniendo la posibilidad de facto de desenvolverse en todo su contenido; (ii) adicionalmente, la Constitución requiere de un esquema idóneo que la proteja frente a actos o disposiciones que la pretendan vulnerar, pues su fuerza normativa radica tanto en su capacidad de adaptarse a los cambios de su contexto, así como en su permanencia, la cual no se refiere a una inmutabilidad, sino a su cabal aplicación; y (iii) la Constitución es el fundamento de validez del resto del ordenamiento jurídico, de lo cual se desprende la posibilidad de llevar a cabo un control de regularidad normativa respecto de aquellas disposiciones que la contraríen.

1a. CXXXV/2015 (10a.)

Amparo en revisión 410/2012. Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa. 21 de noviembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SI ALGUNA DE LAS TESIS CONTENDIENTES SE APARTA DEL SENTIDO Y ALCANCE DE LA EJECUTORIA DE LA CUAL DERIVA, PROCEDE ORDENAR SU ACLARACIÓN, A EFECTO DE NO GENERAR

UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE E INSEGURIDAD JURÍDICA EN EL GOBERNADO Y LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE JULIO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, POR LO QUE HACE AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema de materia civil que corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

Lo anterior tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional y 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley

de Amparo vigente, pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo criterio se señala como discrepante respecto del sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

TERCERO.—**Criterios contendientes.** Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si, en el caso, existe contradicción de criterios, para lo cual, es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El veintidós de noviembre de dos mil trece, el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito** (tribunal denunciante) resolvió el **amparo directo 244/2013**, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

a. **********, **********, ********** y **********, ambos de apellidos **********, demandaron mediante juicio ordinario mercantil en contra de **********, **********, ********** y **********, de apellidos **********, diversas prestaciones, entre ellas, la declaración judicial de rescisión del contrato innominado y, en consecuencia, la declaratoria judicial de rescisión de los acuerdos que con motivo de ese contrato se tomaron en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de **********.

b. De dicho juicio correspondió conocer al Juez Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, el que declaró acreditados los elementos de la acción de rescisión del contrato innominado, consistentes en la existencia de la relación contractual, la exigibilidad de la obligación y el incumplimiento del deudor y, por el contrario, no acreditada la acción de cumplimiento forzoso del contrato que se ejercitó en reconvención.

c. En contra de dicha determinación, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales fueron resueltos por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el sentido de declarar fundado el agravio en que los demandados y actores reconvencionales hicieron valer que no incurrieron en mora por no haberse pactado de manera expresa en el contrato el lugar en que habrían de efectuarse los pagos pactados entre las partes y, por tanto, no haber existido requerimiento de pago por parte de la actora principal, así como que, en el caso, se estaba ante obligaciones recíprocas, por lo que los actores debieron acreditar haber cum-

plido con su obligación de readquirir la totalidad de los derechos de propiedad y posesión de los locales comerciales que componen el condominio de **********.

d. Ante esa declaratoria, se revocó la sentencia de primera instancia y se declaró improcedente la acción de rescisión, y procedente la acción reconvencional de cumplimiento forzoso de contrato.

e. Inconforme con dicha resolución, mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil trece, **********, **********, ********** y **********, promovieron juicio de amparo directo, del cual conoció el tribunal denunciante, es decir, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien resolvió conforme a las siguientes consideraciones:

• Por lo que hace a la indebida improcedencia de la acción de rescisión decretada por la Sala (con base en que en el contrato innominado se establecieron obligaciones recíprocas que debieron ser cumplidas antes de solicitar la rescisión del contrato), así como la indebida aplicación de los artículos 376 del Código de Comercio y 1949 del Código Civil Federal. El Tribunal Colegiado los declaró infundados, toda vez que en el contrato base sí se pactaron obligaciones recíprocas, por lo que la actora sí tenía el deber en la rescisión de acreditar el cumplimiento de su obligación de adquirir el inmueble, sin que fuera obstáculo para ello que los nuevos accionistas hubieren dejado de pagar las últimas cuatro mensualidades, máxime que sólo ante el cumplimiento o allanamiento del acreedor es cuando comienza la mora para el obligado que no cumplió, todo lo que justifica la improcedencia de la acción de rescisión y hace innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación sobre el tópico.

• En relación con la indebida condena al cumplimiento del contrato derivado de la reconvención, fue incorrecto que la responsable determinara que en el contrato innominado base de la acción no se estableció un domicilio específico para el pago, pues como lo afirma la quejosa, bastó que las partes hubieren señalado que el pago debía acontecer en el domicilio de "los accionistas" y que se hubiese señalado en el proemio del contrato su domicilio convencional, para que se tuviera pactado ese domicilio como lugar de pago.

• Para ello, el Tribunal Colegiado consideró que el tercer concepto de violación hecho valer por los quejosos, en el sentido de que la Sala declaró indebidamente que los actores reconvencionales no incurrieron en mora

porque en el contrato no se señaló domicilio para el cumplimiento de los pagos y, por lo tanto, la consignación de pago no fue extemporánea, al no habérseles requerido de pago; son fundados y suficientes, pues como lo afirma la parte quejosa, **bastó que las partes señalaran que el pago debía acontecer en el domicilio de los accionistas y que se hubiese señalado como proemio del contrato su domicilio convencional, para que se tuviera pactado ese domicilio como lugar de pago**.

• Del contrato innominado deriva la intención clara, manifiesta y debidamente especificada de las partes, de señalar como lugar de pago el domicilio convencional de los accionistas, en las reglas de interpretación previstas en los artículos 1851 y 1854 del Código Civil Federal antes referidas, pues asegura que de su contenido integral deriva que **si en el clausulado estipularon que el pago se haría en su domicilio y en el proemio señalaron cuál era su domicilio convencional, entonces, la intención palpable de los contratantes fue señalar el domicilio ahí precisado como lugar de pago**.

• El que no se precisara en cuál tipo de domicilio se debía hacer el pago, no implica que el contrato sea impreciso o general en ese aspecto y mucho menos conlleva a concluir que las partes no pactaron domicilio para el pago, toda vez que para una adecuada interpretación del mismo, el contrato deberá ser analizado en su integridad. Esto es, la ausencia de esa parte del contrato del señalamiento del tipo de domicilio de los accionistas y de su ubicación, no torna al contrato en impreciso o genérico en ese aspecto, si se atiende a que en su propio contenido se señaló expresamente cuál era el domicilio convencional de los accionistas, y que, en atención al principio de interpretación sistemática del contrato, es viable acudir también a esas manifestaciones para desentrañar la real y verdadera intención de los contratantes, no advirtiéndose ninguna otra manifestación que permita considerar alguna duda o falta de certidumbre en cuanto a cuál fue la intención de las partes, al señalar el domicilio de los accionistas como el lugar de pago del adeudo.

• Que tal forma de interpretar el contrato no implica una designación unilateral del domicilio que contravenga el artículo **2082 del Código Civil Federal**,[5] que autoriza a las partes a designar para el pago un domicilio diverso al del deudor, toda vez que si las partes acordaron como lugar de pago el del

[5] "**Artículo 2082.** Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley.—Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos."

domicilio de los accionistas, y en el contrato se estableció expresamente cuál era su domicilio convencional, o sea, aquel para el cumplimiento de las obligaciones, debía aceptarse que fueron ambos contratantes quienes acordaron ese lugar para que los nuevos accionistas cumplieran con la obligación de pago.

• Además, fue incorrecta la conclusión que hizo la Sala, en el sentido de que el domicilio señalado en que podían ser notificadas las partes no era suficiente para concluir que señalaron lugar de pago, pues como afirman los quejosos, en el contrato innominado las partes no señalaron "domicilio para ser notificados", sino domicilio convencional, entendido éste como el lugar para el cumplimiento de las obligaciones.

• Con base en tales consideraciones, ese tribunal no comparte el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 796/2007, de rubro: "RESCISIÓN DE CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA PROBARLA DEBE EXISTIR EL REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DOMICILIO DEL DEUDOR, SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2082 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).". Por lo que ordena denunciar la posible contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II. El **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito** (tribunal denunciado) resolvió el tres de abril de dos mil ocho el **amparo directo 796/2007**, del cual es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:

a. **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** demandaron en la vía ordinaria civil de **********, ********** y **********, de apellidos **********, así como de **********, del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, así como del Instituto de Vivienda del Distrito Federal y del Gobierno del Distrito Federal, diversas prestaciones, entre ellas, el cumplimiento forzoso de un contrato de promesa de compraventa, juicio en el que fue llamada la sucesión de ********** (sic), por conducto de su albacea.

b. De dicho juicio conoció preliminarmente el Juez Vigésimo Octavo Civil del Distrito Federal, quien, al excusarse de conocer del asunto, generó que el conocimiento del mismo correspondiera al diverso Juez Vigésimo Noveno Civil del Distrito Federal, el cual absolvió a los codemandados de las prestaciones reclamadas por la actora principal, absolvió a la actora principal de

la reconvención planteada por ********** y declaró rescindido el contrato de compraventa celebrado por las partes.

c. En contra de dicha determinación, la coactora ********** y la parte demandada interpusieron sendos recursos de apelación, los que fueron resueltos por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la que modificó la recurrida, en el sentido de absolver a los codemandados en el principal de las prestaciones reclamadas, y absolver a la demandada en las reconvenciones.

d. Inconformes con dicha resolución, **********, ********** y **********, todos de apellido **********, interpusieron juicio de amparo del que tocó conocer a este **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito** con el número DC. **********, resuelto el once de octubre de dos mil siete, en el sentido de conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que se dejara insubsistente el fallo reclamado y se emitiera otro con plenitud de jurisdicción, en el que se analizara íntegramente la litis del juicio natural. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala responsable dictó nueva sentencia, en la que confirmó en sus términos el fallo apelado. Esa sentencia fue impugnada a través del juicio de amparo DC. **********, en el que el Tribunal Colegiado concedió la protección solicitada, esencialmente, por lo siguiente:

• Por lo que hace al concepto de violación que impugna la declaración de falta de legitimación de los coactores en el juicio natural (**********, **********, **********, **********, ********** y ********** no tienen legitimación en el contrato base de la acción), expuso que en el contrato base no existía dato alguno que condujera a determinar que ********** actuó en nombre de sus mandantes, sino que lo hizo en nombre propio, por lo que no existía acción alguna respecto de las mandantes contra la vendedora del inmueble.

• El concepto de violación que versa sobre defectuoso cumplimiento de diversa ejecutoria de amparo es inoperante, porque el exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo no es un tema propio de amparo directo.

• En lo relativo a la incongruencia por omisión en el estudio de la acción de cumplimiento forzoso del contrato base de la acción, estimó que eran argumentos inoperantes e infundados, porque la Sala sí estudió el agravio respectivo.

• En lo relativo a que se atendieron cuestiones no planteadas por las partes en la acción de cumplimiento forzoso ejercida en el juicio natural. Se expuso que eran infundados, porque no se introdujeron elementos ajenos a la litis, pues no se alteró lo pedido por las partes, sino que la responsable adujo argumentos que permitían resolver la cuestión planteada de manera efectiva.

• En relación con la declaración de improcedencia de la acción de cumplimiento forzoso ejercida en el juicio principal por los quejosos, el Tribunal Colegiado resolvió que los conceptos de violación eran infundados e inoperantes, porque en el caso las obligaciones contraídas eran simultáneas y, por ello, era improcedente el cumplimiento forzoso del contrato, con base en el incumplimiento del vendedor, entre tanto el demandante comprador no cumpliera con su obligación, sin que se acreditara que ese cumplimiento estuviere condicionado.

• En relación con la condena a la rescisión del contrato base de la acción, el Tribunal Colegiado señaló que eran inoperantes los argumentos novedosos sobre el tópico y los que no combaten las consideraciones conducentes del fallo reclamado, así como diversos argumentos fundados, pero inoperantes por no favorecer a los quejosos.

• En relación con los argumentos que se dirigen a establecer que, en el caso, no existe mora, porque no se requirió de pago al deudor, al no existir domicilio pactado para cumplir tal obligación. El Tribunal Colegiado estimó **fundados los argumentos de queja, en cuanto a que fue incorrecto que la Sala responsable sostuviera que, al no haberse planteado esa causa de improcedencia al fijarse la litis, no podía ser objeto de análisis en la apelación**, porque si en los agravios fue planteado que el Juez natural apreció incorrectamente la litis, en tanto no se observaron los supuestos del artículo 2080 del Código Civil para el Distrito Federal, **era menester que el órgano revisor se pronunciara al respecto y resolviera con plenitud de jurisdicción la controversia planteada**, por no existir reenvío en el recurso de apelación. En ese sentido, señaló el Tribunal Colegiado que si existe una obligación de dar, el incumplimiento acontece desde la fecha del vencimiento del plazo, acorde con lo previsto en el artículo 2079 del Código Civil para el Distrito Federal; el **artículo 2082 del mismo ordenamiento**[6] indica

[6] "**Artículo 2082.** Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley.—Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos."

que, por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convengan otra cosa o lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley, para lo cual citó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2001,[7] a fin de sostener que cuando en los contratos no se designa lugar de pago, opera la regla prevista en el artículo 2082 del Código Civil indicado, en cuanto que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, y para que éste incurra en mora debe ser requerido en su domicilio por el acreedor, por ser una condición o requisito para la procedencia de la acción rescisoria, lo que el juzgador debía estimar de oficio; de lo que concluyó que la Sala "**debió analizar el contrato y establecer de manera fundada y motivada si está demostrado en el caso que en el contrato privado de compraventa no se pactó expresamente el lugar en que debía efectuarse el pago del precio del bien inmueble objeto del mismo y si no se demostró el requerimiento de pago del acreedor en el domicilio del deudor, tal y como lo dispone el artículo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal, la acción rescisoria sería improcedente**, y como es un elemento de la acción de rescisión, no es preciso que el demandado oponga como excepción que no existió el requerimiento como elemento necesario de la acción, por no estar pactado el lugar de pago y, por ende, si en agravio contra la sentencia de primera instancia se planteó ese aspecto, sí **era obligación de la Sala responsable realizar el pronunciamiento correspondiente** sin poder exigir que lo haya opuesto como excepción."[8]

• Enseguida, reiteró que **la Sala debió analizar el agravio,** relativo a que para la procedencia de la acción de rescisión era necesario que el actor demostrara que hubo mora en la compradora, **determinando a la luz de lo**

---

[7] El rubro y texto de esa tesis son: "ACCIÓN RESCISORIA DE CONTRATO. LA MORA O INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA Y SU ACREDITAMIENTO DEBE SER ESTIMADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR.—En términos de lo dispuesto en los artículos 376 del Código de Comercio, y 1778 y 2154 del Código Civil del Estado de México, referidos a contratos de compraventa, para que el contratante-acreedor esté en posibilidad de demandar ante el órgano jurisdiccional la rescisión de contrato, debe acreditar ante éste, además de haber cumplido con su obligación, el hecho de que el contratante-deudor ha incumplido con la suya y, por tanto, incurrido en mora. Ahora bien, tratándose de contratos de compraventa en los que no se haya designado lugar de pago, operará conforme a lo previsto en los artículos 2082 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente en materia mercantil y 1911 del Código Civil para el Estado de México, la regla general que establece que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor; en consecuencia, para que el deudor se constituya en mora, debe ser requerido en su domicilio por el acreedor, hecho este último que, por constituir una condición o requisito para la procedencia de la acción rescisoria de contrato, debe acreditarse ante el juzgador y éste la debe estimar, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de los requisitos de la acción, con independencia de que haya o no alegación de la parte demandada en vía de excepción."

[8] Páginas 381 y 382 de la ejecutoria del juicio de amparo directo DC. 796/2007.

pactado si existió o no pacto sobre el lugar de pago y, de no existir, concluir que el pago tenía que realizarse en el domicilio del deudor, sin que éste tuviera que realizar la consignación del pago para evitar la mora.

• Por ello, concedió el amparo a los quejosos, para el efecto de que **la Sala dejara insubsistente el fallo reclamado y dictara otro en su lugar, en el que reiterara las consideraciones que no habían sido materia de la concesión y analizara los agravios expresados por la quejosa de manera fundada y motivada, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, y resolviera conforme a sus atribuciones**.

CUARTO.—**Existencia de la contradicción de tesis.** En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.

De diversos criterios de esta Suprema Corte podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas. Sirve de sustento la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."[9] y la tesis "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXIS-

[9] Jurisprudencia P./J. 72/2010, de la Novena Época, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, y cuyo texto es el siguiente: "De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad

TENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."[10]

2. Es necesario que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

3. En los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejer-

---

de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

[10] Tesis aislada P. XLVII/2009, de la Novena Época, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXX, julio de 2009, página 67, y cuyo texto es el siguiente: "El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos

cida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

4. Y que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

5. Aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."[11]

6. Además, es aceptable apreciar en la contradicción de tesis, argumentos que, sin constituir el argumento central de la decisión de un tribunal, revelen de manera suficiente el criterio jurídico de un órgano jurisdiccional respecto de un problema jurídico concreto. Sirve de apoyo la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS JURÍDICOS EXPRESADOS 'A MAYOR ABUNDAMIENTO' SON DE TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVER AQUÉLLA."[12]

---

accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

[11] Tesis aislada P. L/94 de la Octava Época, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, tomo 83, noviembre de 1994, página 35, y cuyo texto es el siguiente: "Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

[12] Tesis aislada P. XLIX/2006, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, tesis P. XLIX/2006, página 12, cuyo texto es el siguiente: "El procedimiento de fijación de jurisprudencia firme vía contradicción de tesis tiene una finalidad clara y esencial: unificar criterios en aras de la seguridad jurídica. Así, para uniformar la

De la lectura de las resoluciones contendientes se desprende que **no** existe la contradicción de criterios denunciada.

Lo anterior es así, porque, por un lado, es cierto que los criterios vertidos por los tribunales guardan relación con el contenido de sendos artículos 2082 del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, preceptos que son iguales en su texto, en cuanto que prevén que, por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convengan otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley.

Sin embargo, es relevante para el caso, que mientras el tribunal denunciante resolvió que **bastaba con que las partes hubieren señalado que el pago debía acontecer en el domicilio de los acreedores y que se hubiese señalado en el proemio del contrato su domicilio convencional, para que se tuviera pactado ese domicilio como lugar de pago**, pues del contrato derivaba la intención de las partes de señalar como lugar de pago el domicilio convencional de los acreedores, y en el proemio señalaron cuál era ese domicilio convencional, por lo que la intención palpable de los contratantes fue señalar el domicilio ahí precisado como lugar de pago; que aun cuando no se precisara en cuál tipo de domicilio se debía hacer el pago, no implicaba que el contrato fuera impreciso, ni conlleva a concluir que las partes no pactaron domicilio para el pago, si se atiende a que en su propio contenido se señaló expresamente cuál era el domicilio convencional de los acreedores; y que tal forma de interpretar el contrato no implica una designación unilateral

---

interpretación del orden jurídico nacional son de tomarse en cuenta todos los razonamientos vertidos por los órganos jurisdiccionales contendientes a lo largo de la parte considerativa de sus sentencias, sean constitutivos de la decisión final –el o los puntos resolutivos– o resulten añadidos prescindibles, vinculados indirecta o marginalmente con la cuestión concreta que debe decidirse, pues en ambos casos se está frente a la posición que asume un órgano jurisdiccional ante determinada cuestión jurídica y de la que cabe presumir que seguirá sosteniendo en el futuro. En efecto, en el procedimiento de contradicción de tesis no se decide si una sentencia es congruente con las pretensiones de las partes ni si en la relación entre sus consideraciones y la decisión final hubo exceso o defecto, pues no es un recurso, sino que su función es unificar la interpretación jurídica a fin de eliminar la coexistencia de opiniones diferentes respecto de la forma en la que debe interpretarse o aplicarse una norma legal, y obtener un solo criterio válido, pues su teleología es garantizar la seguridad jurídica. En congruencia con lo anterior, se concluye que para satisfacer esa finalidad, en el procedimiento de contradicción de tesis no es menester que los criterios opuestos sean los que, en los casos concretos, constituyan el sostén de los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de 'a mayor abundamiento' pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales y sean la posición que un Tribunal Colegiado de Circuito adopta frente a ciertos problemas jurídicos que, presumiblemente, sostendrá en lo futuro."

del domicilio que contravenga el artículo 2082 del Código Civil Federal, toda vez que si las partes acordaron como lugar de pago el del domicilio de los acreedores, y en el contrato se estableció expresamente cuál era su domicilio convencional, o sea, aquel para el cumplimiento de las obligaciones, debía aceptarse que fueron ambos contratantes quienes acordaron ese lugar para que los deudores cumplieran con la obligación de pago.

El tribunal denunciado, **lejos de abordar el análisis de la cuestión jurídica, consistente en la posibilidad de adoptar el domicilio convencional señalado por las partes para definir el lugar en donde se tendría que hacer el pago**, sólo se concretó a señalar que: fue incorrecto que la Sala responsable sostuviera que, al no haberse planteado la causa de improcedencia al fijarse la litis, no podía ser objeto de análisis en la apelación, porque si en los agravios fue planteado que el Juez natural apreció incorrectamente la litis, en tanto no se observaron los supuestos del artículo 2080 del Código Civil para el Distrito Federal, era menester que el órgano revisor se pronunciara al respecto y resolviera con plenitud de jurisdicción la controversia planteada, por no existir reenvío en el recurso de apelación; que el artículo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal prevé que, por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convengan otra cosa o lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley, por lo que **cuando en los contratos no se designa lugar de pago, opera la regla prevista en el artículo 2082 del Código Civil indicado, en cuanto a que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, y para que éste incurra en mora debe ser requerido en su domicilio por el acreedor, por ser una condición o requisito para la procedencia de la acción rescisoria, lo que el juzgador debía estimar de oficio; de lo que concluyó que la Sala debió analizar el contrato y establecer, de manera fundada y motivada, si está demostrado en el caso que en el contrato privado de compraventa no se pactó expresamente el lugar en que debía efectuarse el pago del precio del bien inmueble objeto del mismo, y si no se demostró el requerimiento de pago del acreedor en el domicilio del deudor, tal y como lo dispone el artículo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal, la acción rescisoria sería improcedente, y como es un elemento de la acción de rescisión no es preciso que el demandado oponga como excepción que no existió el requerimiento como elemento necesario de la acción por no estar pactado el lugar de pago**; por lo que la **Sala debía analizar el agravio consistente en que, para la procedencia de la acción de rescisión, era necesario que el actor demostrara que hubo mora en la compradora, determinando, a la luz de lo pactado, si existió o no pacto sobre el lugar de pago y, de no existir, concluir que el pago tenía que realizarse en el domicilio del deudor, sin que éste tuviera que realizar la consignación del pago para evitar la mora**.

Por ello, concedió el amparo a los quejosos, para el efecto de que la Sala dejara insubsistente el fallo reclamado y dictara otro en su lugar, en el que reiterara las consideraciones que no habían sido materia de la concesión y analizara los agravios expresados por la quejosa de manera fundada y motivada, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo y resolviera conforme a sus atribuciones.

Lo anterior revela que no existe la contradicción de criterios denunciada.

En efecto, la afirmación consistente en que: **basta que las partes hubieren señalado que el pago debía acontecer en el domicilio de los acreedores y que se hubiese señalado en el proemio del contrato su domicilio convencional, para que se tuviera pactado ese domicilio como lugar de pago**. No se opone a la diversa afirmación consistente en que: **cuando en los contratos no se designa lugar de pago, opera la regla prevista en el artículo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal, en cuanto a que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor y, para que éste incurra en mora, debe ser requerido en su domicilio por el acreedor, por ser una condición o requisito para la procedencia de la acción rescisoria, lo que el juzgador debía estimar de oficio**.

Ahora bien, no obsta a lo anterior que de la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 796/2007, se emitió y publicó la tesis I.3o.C.690 C, cuyos rubro y texto son:

"RESCISIÓN DE CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA PROBARLA DEBE EXISTIR EL REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DOMICILIO DEL DEUDOR, SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2082 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).—El precepto citado establece una regla general consistente en que el pago de una obligación debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convengan otra cosa o lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley. Cuando no se pactó lugar de pago en el contrato de compraventa respectivo ni lo contrario derive de la naturaleza de la obligación o de la ley, para que el deudor se constituya en mora debe ser requerido en su domicilio por el acreedor porque es una condición, requisito o elemento de la procedencia de la acción rescisoria. **No basta que estén señalados en el contrato de mérito los domicilios de las partes en que puedan ser notificadas para los efectos del cumplimiento del mismo porque el lugar de pago de las obligaciones debe**

pactarse de modo expreso. En caso de no haber pacto expreso, opera la regla general en supletoriedad de la voluntad de las partes, para establecer que el lugar de pago es el domicilio del deudor, lo que arroja para el acreedor la carga de probar que previo a la presentación de la demanda requirió el pago al deudor para demostrar la mora y que la acción rescisoria sea procedente."[13]

Cuyo texto, por un lado, **se aparta en algunas afirmaciones del alcance de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 796/2007 del que proviene**[14] y, por otro lado, pudiera admitir una interpretación que, eventualmente, pugnara con lo sostenido por el tribunal denunciante.

Se sostiene que tal circunstancia no es trascendente para resolver como inexistente la contradicción de posturas jurídicas en este asunto, porque el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis que cuando al resolver una contradicción de criterios se advierta

---

[13] Tesis de la Novena Época, registro digital: 169051, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 1190.—"Amparo directo 796/2007. María de los Ángeles Hernández Rosas y otros. 3 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas."

[14] A semejante conclusión arribó esta Sala, al resolver como inexistente la diversa contradicción de tesis 42/2011, por ejecutoria del 26 de octubre de 2011, en la que también contendió la tesis I.3o.C.690 C, que ahora se analiza nuevamente. Para mayor claridad se transcribe la parte conducente de la CT. 42/2011, que dice: "No pasa inadvertido que en el texto de la tesis **I.3o.C.690 C**, de rubro: 'RESCISIÓN DE CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA PROBARLA DEBE EXISTIR EL REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DOMICILIO DEL DEUDOR, SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2082 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).', se estableció que: 'No basta que estén señalados en el contrato de mérito los domicilios de las partes en que puedan ser notificadas para los efectos del cumplimiento del mismo porque el lugar de pago de las obligaciones debe pactarse de modo expreso.'; sin embargo, de la ejecutoria del juicio de amparo directo 796/2007, de la que derivó dicho criterio, se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado ni siquiera analizó las cláusulas del contrato materia de litigio para determinar si en éste existía o no pacto expreso del lugar de pago o, en su caso, la designación de domicilio convencional, sino que tal análisis fue encomendado a la autoridad responsable en los efectos de la concesión del amparo.—En esa medida, si el Tercer Tribunal Colegiado no analizó las cláusulas del contrato materia de litigio y, por ende, no emitió consideración alguna en el sentido de por qué no resultaría suficiente la designación de un domicilio convencional en un contrato y por qué sí sería necesario el pacto expreso del lugar de pago para que no operara la regla general prevista en el artículo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal; es incuestionable que la sola determinación de que 'cuando en los contratos no se pacta expresamente lugar de pago, debe estimarse que éste debe hacerse en el domicilio del deudor, de conformidad con el mencionado numeral 2082', es insuficiente para sostener que existe una contradicción con el criterio sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.9o.C.177, de rubro: 'RESCISIÓN DE CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA PROBARLA DEBE EXISTIR EL REQUERIMIENTO DEL DEUDOR, EL CUAL PUEDE SER EN EL DOMICILIO CONVENCIONAL SIN QUE SEA NECESARIO EL PACTO EXPRESO DE LUGAR DE PAGO.'."

que **lo expuesto en una tesis publicada no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, debe atenderse al contenido de la ejecutoria para resolver la contradicción de tesis**.[15]

Ello, máxime que el criterio judicial que resuelve un asunto se compone de las argumentaciones que integran la sentencia respectiva, por lo que el argumento de derecho, que de manera inexacta se plasma en la publicación de una tesis para su publicación y difusión, no constituye un verdadero criterio judicial susceptible de contender en una contradicción de tesis.

Todo lo anterior confirma que en la solución de este expediente no es factible atender al texto integral de la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con el número I.3o.C.690 C, sino al contenido de la ejecutoria del juicio de amparo directo 796/2007.[16]

---

[15] El criterio invocado corresponde a la tesis P. LXXXI/95, de la Novena Época, registro digital: 200298, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo II, octubre de 1995, página 81, cuyos rubro y texto son: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA.—Si del análisis de una tesis y de la ejecutoria respectiva se advierte que aquélla resulta confusa o no refleja lo que en la ejecutoria se sostiene, para efectos de la contradicción debe atenderse a ésta y no a la tesis redactada, puesto que el criterio que sustenta el órgano que resuelve se encuentra en las consideraciones de la propia resolución. En esta hipótesis, la inexactitud de la tesis en relación con la ejecutoria a la que se refiere, lleva, además y con independencia de la existencia o inexistencia de la contradicción que se hubiere denunciado, a la corrección de la tesis relativa, pues si a través de la publicación de las tesis se dan a conocer los diversos criterios que sustentan los órganos resolutores, es lógico que por razones de seguridad jurídica deba corregirse y darse a conocer el verdadero criterio del juzgador que no fue reflejado con fidelidad.
"Contradicción de tesis. Varios 112/89. Relativo a la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito. 21 de agosto de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot."

[16] Es aplicable para el caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Novena Época, registro digital 165077, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, cuyos rubro y texto son: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

De ahí que se sostenga la inexistencia de la contradicción de tesis en este asunto.

QUINTO.—**Se ordena aclarar la tesis I.3o.C.690 C.** Pese a que se ha determinado que la contradicción de tesis a la que este expediente se refiere es inexistente, no se puede soslayar, por un lado, que el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios.

Y, por otro lado, que el texto de la tesis **I.3o.C.690 C se aparta en cierta porción del sentido y alcance de la ejecutoria dictada en el juicio del que proviene, lo que también tiende a generar incertidumbre para los gobernados y los órganos jurisdiccionales**, al difundirse públicamente una postura jurídica en formato de tesis, cuyo contenido no guarda entera correspondencia con el criterio judicial sostenido en la ejecutoria de la que deriva.

En tal virtud, con la finalidad de terminar con la incertidumbre e inseguridad jurídica que genera esa circunstancia, es necesario que **se ordene al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aclare el texto de la tesis I.3o.C.690 C**, a fin de que se ajuste en congruencia con el alcance del criterio judicial sostenido en la ejecutoria que se señaló como su precedente.[17] Asimismo, en un plazo de diez días hábiles, deberá hacer del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las gestiones realizadas para tal fin.

Por lo expuesto y fundado,

RESUELVE:

PRIMERO.—No existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, respecto del sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.—Se ordena al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito aclarar el texto de la tesis **I.3o.C.690 C**, a fin de que se

---

[17] Es aplicable para el caso, en lo conducente, la tesis P. LXXXI/95, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA.", cuyos texto y datos de localización ya obran en el cuerpo de esta ejecutoria.

ajuste en congruencia con el criterio judicial sostenido en la ejecutoria que se señaló como su precedente, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución, en el entendido de que en un plazo de diez días hábiles deberá hacer del conocimiento de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las gestiones realizadas para tal fin.

Notifíquese;

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los Ministros: (ponente) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo. En contra del emitido por el Ministro José Ramón Cossío Díaz, por lo que hace a la competencia y por unanimidad de votos de los Ministros (ponente) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, por lo que hace al fondo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis aislada y de jurisprudencia P. I/2012 (10a.) y 1a./J. 46/2001 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, página 9 y Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 6, respectivamente.

ESCENA DEL CRIMEN. PARA LA VALORACIÓN DE VESTIGIOS QUE PUEDEN SER DE SANGRE, ES NECESARIO QUE SE ACREDITE TAL NATURALEZA MEDIANTE LOS POSTERIORES EXÁMENES DE LABORATORIO. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de que el juzgador pueda arribar a cierta conclusión sobre manchas hemáticas, es necesario cerciorarse que efectivamente las evidencias correspondan a sangre, pues el sustento de una determinación criminal deberá consistir en los exámenes que posteriormente se lleven a cabo en un laboratorio, en el cual, mediante los exámenes científicos conducentes, se podrá emitir un diagnóstico fiable sobre las evidencias encontradas, permitiendo así que las mismas se eleven a rango de prueba. Lo anterior

es así, pues el análisis pericial consiste en el complemento indispensable para que los elementos encontrados y preservados mediante la cadena de custodia puedan generar convicción en el juzgador, pues es a través del análisis realizado en los laboratorios de los elementos hallados en una determinada escena criminal, que las autoridades correspondientes podrán obtener una conclusión fiable.

1a. CXXXIV/2015 (10a.)

Amparo directo 78/2012. 21 de agosto de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES CONSTITUCIONAL. El precepto citado, en su párrafo segundo, establece que en los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito, los afectados por un proceso de extinción de dominio tendrán derecho a reclamar la reparación del daño. Ahora bien, el dictado de la sentencia emitida en la causa penal que determine la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito no genera, per se, el derecho a exigir una indemnización por concepto de reparación de daños y perjuicios, antes bien, el quebrantamiento producido al afectado (propietario del bien) por el trámite del juicio de extinción de dominio es el que genera el derecho a reclamar dicha indemnización. En ese sentido, si la sentencia en la que se determine la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito, impacta en la decisión del juez que conozca de la extinción de dominio, al tratarse de una autonomía relativa la que se prevé en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que el artículo 10 de la Ley Federal de Extinción de Dominio que ordena indemnizar al afectado por los daños sufridos es acorde con un sistema de protección de los derechos fundamentales de los gobernados y, por ende, no puede sostenerse que sea inconstitucional, en tanto autoriza el derecho a cobrar una indemnización para el caso de que se hubieren generado daños con motivo de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional que haya conocido del juicio de extinción de dominio.

1a. CXXIX/2015 (10a.)

Amparo directo 56/2012. 3 de septiembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La interpretación teleológica del artículo 22, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal, en el sentido de que el procedimiento de extinción de dominio es jurisdiccional y autónomo al de la materia penal, lleva a concluir que dicha separación no es absoluta, sino relativa, porque la autonomía a que se refiere el precepto constitucional citado, debe entenderse como la independencia de aquel que juzga sobre el tema de la extinción de dominio y del que ha de emitir decisión en cuanto a la responsabilidad de quien se encuentra sujeto al juicio penal, de forma que tal distinción involucra independencia en la norma que cada uno de ellos ha de aplicar en el proceso del que es rector, en el desarrollo de cada uno de los juicios y en la decisión que adopten sobre temas respecto de los cuales no compartan jurisdicción (básicamente la responsabilidad penal, por no ser éste un tópico sobre el que ambos jueces deban decidir); sin embargo, tal disociación no es aplicable en la calificación de los elementos del cuerpo del delito, pues en cuanto a ese aspecto, existe una vinculación total, de manera que, por regla general, el juez de extinción de dominio debe sujetarse a la decisión que adopte el especializado en la materia penal cuando éste concluye, en una resolución intra procesal, que los elementos del cuerpo del delito no quedaron acreditados, o al dictar la sentencia definitiva, que el delito no se demostró. De ahí que el artículo 50 de la Ley Federal de Extinción de Dominio al disponer que cuando el juez de la causa penal determine la inexistencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito, el juzgador de extinción de dominio deberá ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios que, en su caso, se hayan producido durante el tiempo en que fueran administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, no viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1a. CXXX/2015 (10a.)

Amparo directo 56/2012. 3 de septiembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL CÓNYUGE QUE AFIRMA TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN, APOYADO EN LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE LO UNE CON EL DEMANDADO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERVENIR EN EL JUICIO RELATIVO, AUNQUE TAL RÉGIMEN PATRIMONIAL NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. En cuanto a dicho registro, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la restricción prevista en algunas legislaciones, en cuanto que la sociedad conyugal no surte efectos frente a terceros si no consta inscrita en el Registro Público de la Propiedad, persigue una finalidad constitucionalmente válida que consiste en otorgar seguridad jurídica al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, la cual es necesaria para no dejar desamparado al tercero de buena fe que confió en las inscripciones registrales y, en detrimento de su patrimonio, realizó un pago o hizo una erogación por un valor equivalente al del inmueble en cuestión. Como se advierte, la inscripción de la sociedad conyugal que rige respecto de un bien inmueble ante el Registro Público de la Propiedad, no tiene efectos constitutivos sino de publicidad y, en ese sentido, obedece más a la protección a los terceros adquirentes de buena fe que al cumplimiento de un requisito para tener por constituida la modalidad patrimonial de que se trata. Esto es, la inscripción del bien inmueble ante la institución registral no debe considerarse como uno de los requisitos que deba satisfacer el cónyuge que se ostenta tercero de buena fe, para intervenir en el juicio de extinción de dominio a defender sus derechos, pues ese requisito –si bien es útil para que desde el escrito de demanda el Ministerio Público solicite el llamamiento a juicio del titular y del cónyuge cuya sociedad se encuentra inscrita–, es de carácter publicitario y, por ende, su omisión no puede dar lugar a que el cónyuge que haya sido descuidado en satisfacer esa obligación, por esa sola razón pierda su derecho de audiencia en el juicio en el que se pretende extinguir el dominio del bien por ser instrumento, objeto o usado para la comisión de alguno de los delitos previstos en el artículo 22, párrafo segundo, fracción II, constitucional. Por el contrario, ante la posibilidad de perder los derechos de propiedad que tiene sobre su bien sin contraprestación ni compensación alguna, con motivo de la acción ejercida por la Repre-

sentación Social, es imperativo que cada propietario sea llamado al juicio para ejercer sus derechos.

1a. CXXVI/2015 (10a.)

Amparo directo 33/2012. 5 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La interpretación sistemática de los artículos 4 y 52 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, y de su artículo transitorio tercero, lleva a concluir que el Gobierno del Distrito Federal está legitimado (en la causa) para incoar la acción de extinción de dominio, a través de la dependencia que el órgano legislativo local designó para fungir como su representante en este tipo de procesos, esto es, a través del Agente del Ministerio Público de esa institución especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio (legitimación en el proceso). Al respecto, se parte de la base de que la legitimación en la causa es un presupuesto material de la sentencia favorable vinculado a la personería sustantiva y la segunda es un presupuesto procesal referido única y exclusivamente a la capacidad para comparecer al proceso. En ese tenor, si la ley de que se trata dispone en el penúltimo párrafo de su artículo 4, que los bienes cuya propiedad se extinga en el juicio de que se trata se aplicarán a favor del Gobierno del Distrito Federal e incluso se le faculta para hacer los pagos a terceros sobre los gravámenes que pesen sobre el inmueble, la reparación por concepto de daños y perjuicios que pudieran surgir a favor de las víctimas u ofendidos, así como otros gastos derivados de la extinción del dominio, para conservar la propiedad del bien, debe concluirse que es el Gobierno del Distrito Federal el que está interesado en que se estime fundada la pretensión y, por ende, que goza de legitimación activa en la causa. Ahora bien, lo trascendental en este tema es que dicha comparecencia se verifique a través del preciso órgano que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha facultado para tal efecto y que en el caso corresponde al Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, especializado en el Procedimiento de Extinción de Dominio, al que la propia ley le otorga la calidad de parte en el juicio.

No obsta a lo anterior, la circunstancia de que ni el artículo 22 ni el 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculten al Gobierno del Distrito Federal para iniciar un procedimiento de extinción de dominio, pues no puede exigirse tal especificidad constitucional, cuando lo ordinario es que la Norma Fundamental no prevea cuestiones de ese tipo, ya que es en las leyes reglamentarias en las que el legislador ordinario despliega sus facultades de creación normativa, entre las cuales está la relativa a regular los asuntos de índole procesal; así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, es precisamente ésta la que reglamenta la instauración del procedimiento de Extinción de Dominio previsto en el artículo 22 constitucional; por lo que si, como se ha dicho, a partir del contenido de esta ley reglamentaria se puede afirmar la existencia de la legitimación en la causa del Gobierno del Distrito Federal, no es trascendente que la Carta Magna no contenga esa disposición expresa si, en su caso, ello corresponde a la libertad de configuración del legislador local.

1a. CXXIV/2015 (10a.)

Amparo directo 49/2012. 15 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Rosalía Argumosa López, Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 33/2012. 5 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Con1treras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

AMPARO DIRECTO 49/2012. Véase página 242.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO. En términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que proceda el juicio de amparo, el quejoso debe demostrar tener un interés legítimo, o bien, un interés jurídico, siendo este último el que faculta al Ministerio Público a promover el juicio de amparo directo contra la sentencia de segunda instancia que desestima su pretensión en un juicio de extinción de dominio. En efecto, el inte-

rés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuya posible afectación impacta de forma personal y directa en la esfera jurídica del quejoso y es el que éste debe demostrar cuando el acto reclamado consista en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese sentido, el interés jurídico que ostenta el Ministerio Público que reclama la sentencia definitiva dictada en los juicios a que se refiere el artículo 22, párrafo segundo, de la Constitución Federal, deriva tanto del carácter de parte actora que le reconoce la Ley Federal de Extinción de Dominio, como de representante de las víctimas. Al respecto, como demandante, la actividad que realiza dicha institución consiste en someter una pretensión ante la autoridad judicial, siendo el juzgador el que debe resolver lo conducente de acuerdo con los elementos de prueba que se desahoguen en el proceso; de manera que cuando dicho actor ve desestimada su pretensión, sufre una afectación en su calidad de parte en la relación procesal, respecto de lo cual puede reclamar transgresión al derecho a un debido proceso, que corresponde a un derecho subjetivo que ejerce la representación social para evitar la autotutela en un asunto en el que la propia Norma Fundamental ha resuelto que el Estado (representado por el Ministerio Público especializado en la materia) debe someter una pretensión a la potestad de los órganos jurisdiccionales para que el demandado vea satisfecho su derecho de audiencia en los casos en que se pretenda la extinción del dominio de bienes a favor –principalmente– de las víctimas, cuyos intereses representa por orden expresa de la propia ley. En estas circunstancias, cobra aplicación el contenido de los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Amparo, los cuales facultan para promover juicio de amparo a quien perjudique el acto reclamado y reconocen la calidad de parte en dicho juicio a quien se vea agraviado con el dictado de ese acto.

1a. CXXVII/2015 (10a.)

Amparo directo 56/2012. 3 de septiembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 50/2013. 10 de septiembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto aclaratorio, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón y Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY RESPECTIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, CUYA TRANSGRESIÓN PUEDA DAR LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O A DESESTIMAR LA PRETENSIÓN. El precepto citado prevé que, en caso de que el agente del Ministerio Público acuerde ejercer la acción de extinción de dominio, la presentará ante el juez dentro de las veinticuatro horas siguientes a que haya tomado esa decisión, cuya demanda debe contener los requisitos que la propia norma establece. Ahora bien, el término previsto en esa disposición legal no constituye un requisito de procedencia, cuya transgresión pueda dar lugar al desechamiento de la demanda o a desestimar la pretensión, antes bien, se trata de una exigencia de índole administrativa previa al inicio del juicio, pues ninguna trascendencia tendrá en el desarrollo de aquél ni la omisión de cumplir con esa encomienda impedirá el estudio de fondo del asunto, elemento que constituye la nota distintiva de los requisitos de procedencia, ya que en todo caso, la falta a esa disposición traerá alguna sanción administrativa para el funcionario que no cumplió con su encomienda, pero de ninguna manera el legislador local estableció ese hecho como un requisito o condición para que procediera la vía ni la ley sanciona su inobservancia con el desechamiento de la demanda o la desestimación de la pretensión.

1a. CXXV/2015 (10a.)

Amparo directo 33/2012. 5 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosalía Argumosa López, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO B, DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL "OCULTAMIENTO". El precepto, párrafo, fracción e inciso citados, establecen que la extinción de dominio procederá respecto de bienes que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a "ocultar" o mezclar bienes producto del delito, siempre que se reúnan los extremos del inciso a) del artículo referido. Así, los supuestos regulados en los diversos incisos de la fracción II citada dependen necesariamente de que se acredite el cuerpo del delito de los ilícitos de delincuencia organizada, contra la salud,

secuestro, robo de vehículos o trata de personas. Asimismo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 26/2013 (10a.)[1], sostuvo que para tener por acreditado el elemento "ocultar", es necesario advertir, del cúmulo probatorio, que a quien se atribuye esa conducta tiene la clara y manifiesta voluntad de impedir que la autoridad pueda tener conocimiento de aquello que pretende ocultar. Por ende, es incorrecto sostener que basta que el bien producto del delito se introduzca momentáneamente en un inmueble para que se acredite el "ocultamiento" para la procedencia de la acción de extinción de dominio, ya que el Ministerio Público debe aportar indicios suficientes o elementos de prueba de que hubo una clara y manifiesta voluntad de ocultar, encubrir, tapar, esconder o impedir que la autoridad tuviese conocimiento de la existencia del bien producto del delito, o de que el inmueble fue utilizado para ocultar bienes objeto de los delitos referidos. Entre otras cosas, el representante social podría aportar indicios suficientes de la existencia de algún mecanismo para ocultar los bienes, así como la renuencia a dar información a la autoridad, a permitir el acceso al inmueble, a ciertas partes de él, la existencia de evasivas, la declaración de hechos falsos, las anomalías en la información proporcionada o una concatenación de pruebas que demuestren o exhiban un modus operandi que no es acorde con el uso que se supone se le está dando al inmueble. Sin embargo, de ninguna manera puede ser suficiente para tener por acreditada la acción de extinción de dominio, el que un bien producto de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 22 constitucional, haya pasado o estado momentáneamente en un inmueble. Máxime que la hipótesis a que se refiere el inciso b) de la fracción II de dicho precepto, parte de la premisa de que el inmueble de que se trata no es, ni ha sido, instrumento, objeto ni producto del delito.

1a. CXXXI/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 3184/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

[1] La tesis de jurisprudencia 1a./J. 26/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 729, con el rubro: "DELITOS FISCALES. EL ELEMENTO TÍPICO 'OCULTAR' A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACREDITA POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ACTIVO OMITA DESAHOGAR ÍNTEGRAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL RESPECTO DE SUS REGISTROS CONTABLES, SINO QUE ES NECESARIO QUE DEL CÚMULO PROBATORIO SE ADVIERTA SU MANIFIESTA VOLUNTAD DE IMPEDIR LA CONSULTA."

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE ACTOS PREPARATORIOS DE LA ACCIÓN RESPECTIVA, CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Para determinar la competencia para conocer de actos preparatorios de la acción de extinción de dominio, no basta con atender a la naturaleza de dicha acción, ya que su naturaleza no puede encuadrarse plenamente en las materias penal o civil. Si bien su finalidad es patrimonial, su origen deriva de la acreditación de un "hecho ilícito" tipificado como delito en la legislación penal, es decir, su origen está vinculado con una causa penal. Por ello, su preparación corresponde a la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa que esté investigando el delito, o a la Procuraduría General de la República en materia federal, y son dichas instancias quienes están facultadas para investigar y solicitar la información necesaria para determinar si debe ejercitarse la acción de extinción de dominio. Sin embargo, una vez que el procurador general de justicia determina que sí debe ejercerse la acción de extinción de dominio, la demanda se presenta ante jueces de jurisdicción especializada, según se colige del artículo 12 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México. Así las cosas, puede sostenerse que la acción aludida se desvincula del proceso penal hasta que se presenta la demanda ante el juez especializado. Lo anterior lo corrobora el artículo 3 del ordenamiento citado, que distingue entre la preparación de la acción y el propio juicio, una vez ejercida la acción ante el juez competente, al disponer que, en lo no previsto por dicha ley, la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio se rige por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y, por el contrario, después de ejercida la acción, el juicio de extinción de dominio se rige, en lo no previsto por dicha ley, por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Entonces, sólo después de presentada la demanda e iniciado el juicio de extinción de dominio, la acción se desvincula del proceso penal para seguir su propio curso, atendiendo a las reglas previstas por la propia ley de extinción de dominio y, supletoriamente, a lo que disponga el código civil adjetivo. De ahí que, para determinar la competencia para conocer de actos preparatorios de la acción de extinción de dominio, es necesario considerar la etapa del procedimiento de extinción de dominio al que pertenezca el acto reclamado y las normas que lo rigen. Consecuentemente, si el artículo 3, fracción I, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, establece que la preparación de la acción de extinción de dominio se regula por el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, es inconcuso que la competencia para conocer de los actos preparatorios de dicha acción, corresponde a los tribunales especializados en materia penal, pues no sería viable que un tribunal colegiado de circuito en materia civil aplique un código de procedimientos penales, en todo lo que se refiere a los aspectos procedimentales de la etapa de prepara-

ción; máxime, cuando los actos reclamados pertenecen a la etapa de preparación de un posible procedimiento de extinción de dominio, que todavía no inicia y está en etapa de estudio sin desvincularse de la causa penal.

1a. CXXXII/2015 (10a.)

Conflicto competencial 66/2014. Suscitado entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Segundo Circuito. 27 de agosto de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular, y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Los citados preceptos legales no transgreden el principio de autonomía prescrito en el artículo 22 constitucional al identificar el hecho ilícito con el cuerpo del delito. El concepto de hecho ilícito a que se refiere la extinción de dominio, en términos normativos, no está disociado del origen eminentemente penal de la conducta delictiva que le da origen; así, la circunstancia de que el artículo 2 de la Ley Federal de Extinción de Dominio remita a lo que, sobre cuerpo del delito, prescribe el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, como conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera, no resulta violatoria del artículo 22 constitucional; por el contrario, asumir que existe una diferencia sustancial entre los conceptos jurídicos de hecho ilícito y cuerpo del delito, sería tanto como desconocer que la acción de extinción de dominio tiene su origen, necesariamente, en la comisión de una conducta considerada como delito por la ley penal, relativa a la delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

1a. CXXVIII/2015 (10a.)

Amparo directo 56/2012. 3 de septiembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo

Rebolledo, quienes formularon voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Rosa María Rojas Vértiz Contreras, Rosalía Argumosa López, Horacio Nicolás Ruiz Palma y Julio César Ramírez Carreón.

Amparo directo 50/2013. 10 de septiembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto aclaratorio, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes formularon voto de minoría. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón y Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace a la materia de extinción de dominio, debe interpretarse en el sentido de que están prohibidos todos los actos confiscatorios, sin excepción, y que no debe considerarse como tal a la extinción de dominio, mientras no sea inusitada, trascendental o desproporcionada. En ese sentido, es incorrecto sostener que las medidas cautelares previstas en la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal implican una extinción de dominio de facto y, por tanto, actos confiscatorios que vulneren el precepto constitucional citado, toda vez que las medidas cautelares son órdenes judiciales que no contienen una decisión jurisdiccional sustantiva, es decir, no constituyen, reconocen, ni extinguen derechos, sino que simplemente tienen por objeto conservar o asegurar la permanencia de una situación fáctica concreta, para salvaguardar la integridad de la litis, además, porque la esencia de las medidas cautelares corresponde a la de los actos de molestia y no a la de los privativos, lo cual significa que no disminuyen, menoscaban o suprimen definitivamente un derecho del gobernado, sino que, pese a afectar su esfera jurídica, sólo restringen de forma provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. De manera que el hecho de que esas medidas cautelares tienen como efecto suspender el ejercicio del dominio y la disposición de los bienes, no debe interpretarse en el sentido de que suprimen el derecho real de propiedad, sino que lo restringen provisionalmente, precisamente para prevenir que mediante algún acto de disposición se altere o destruya el objeto de la litis, pues ello afectaría las finalidades e, incluso, la existencia del procedimiento. Esto es, durante la imposición de estas medidas, el afectado sigue siendo titular del derecho sustantivo de propiedad, pero sobre éste, se crea

un gravamen con efectos diferidos en el tiempo, que le impide su ejercicio pleno temporalmente. Ahora bien, pueden existir situaciones concretas en las que los efectos de una medida cautelar pudieran parecer, en la práctica, idénticos que los derivados de la propia extinción de dominio, por ejemplo, cuando el objeto del juicio es un bien consumible, o de tal naturaleza que si no se usa o administra de manera muy precisa, sufre un menoscabo en su valor o incluso puede perderse, o cuando, en términos de la legislación aplicable, la entidad en cuya custodia se encuentra el bien (Secretaría de Finanzas u Oficialía Mayor del Distrito Federal) deba disponer de éste en pública subasta, de inmediato o tras un corto lapso anterior a la resolución de la sentencia, en ciertos casos contemplados por la ley, que haga suponer que la simple desposesión o aseguramiento del bien, o la suspensión de actos de disposición, implican fácticamente una desapropiación material. Sin embargo, ello no es así, pues aun cuando desde el punto de vista fáctico puede parecer que la ejecución de ciertas medidas cautelares equivale a la propia sustracción de bienes, jurídicamente ello no ocurre, porque si a resultas del juicio, el dueño conserva su derecho de propiedad, éste no se afecta en esencia por las medidas cautelares. Así, con base en ese derecho de propiedad incólume, el dueño podrá exigir la devolución del bien con sus frutos y accesorios, o el valor del bien y una indemnización por daños y perjuicios en caso de pérdida o menoscabo por dolo o negligencia de la entidad que mantuvo la cosa bajo su cuidado o administración, o bien, el valor de adquisición del bien, con sus réditos, en caso de que éste se hubiere enajenado. Además, la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal no autoriza al juez para ordenar cualquier medida cautelar que solicite el Ministerio Público, mucho menos si, en términos del artículo 22 de la Constitución Federal, se trata de una medida que deriva en un acto confiscatorio, ya que en cada caso en particular, el juzgador debe atender a las circunstancias especiales y emitir su decisión de forma fundada y motivada. Por tanto, no puede sostenerse que los artículos 11 a 14 y 16 a 18 de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, que regulan el tema de las medidas cautelares, violan el artículo 22 constitucional, porque permitan la imposición de una medida cautelar confiscatoria.

1a. CXXXVII/2015 (10a.)

Amparo en revisión 437/2012. 8 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto aclaratorio. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Mireya Meléndez Almaraz, Horacio Nicolás Ruiz Palma, Rosalía Argumosa López, Julio César Ramírez Carreón, Rosa María Rojas Vértiz Contreras y Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS. La relación entre lenguaje y la identidad de las personas conlleva una mezcla compleja de factores individuales, sociales y políticos que permite que las mismas se consideren miembros de una colectividad o se sientan excluidas de ésta. Así, donde existen conflictos sociales, y en particular reivindicaciones colectivas, el uso del lenguaje puede permitir la eliminación de prácticas de exclusión y estigmatización. Tal lenguaje influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando que los prejuicios sociales, mismos que sirven de base para las prácticas de exclusión, se arraiguen en la sociedad mediante expresiones que predisponen la marginación de ciertos individuos. Las percepciones o las imágenes que tenemos de ciertos grupos influyen de forma definitiva en nuestras expectativas hacia ellos, así como en nuestros juicios y en nuestro comportamiento. Así, la representación de "normalidad" con la cual una sociedad habla sobre algo o lo simboliza se le conoce como discurso dominante, mismo que se caracteriza por la construcción de un conjunto más o menos estructurado de creencias en relación a los miembros de un grupo, a lo cual se le denomina como estereotipo. Así, los estereotipos contienen explícita o implícitamente juicios de valor negativos sobre los integrantes de un grupo social determinado, ante lo cual se convierten en instrumentos para descalificar y, en última instancia, para justificar acciones y sucesos en su contra.

1a. CXXXIII/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 2806/2012. Armando Prida Huerta. 6 de marzo de 2013. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes formularon voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU IMPACTO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE UNA DEFENSA ADECUADA Y EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA EN MATERIA PENAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el principio de progresividad es indispensable para consolidar la garantía de protección de la dignidad humana, porque la observancia a dicho principio impide, por un lado, la interpretación restrictiva de las normas de derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección y, por otro lado, favorece la evolución de dichas normas para ampliar su alcance de protección. A su vez, por lo que respecta a los procedimientos judi-

ciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el debido proceso puede definirse como el conjunto de actos de diversas características que tienen la finalidad de asegurar, tanto como sea posible, la solución justa de una controversia, aunado a que uno de los fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos de los individuos. Así, por la existencia del vínculo entre los Derechos Humanos y el procedimiento judicial, el principio de progresividad ha encontrado un contexto propicio para desarrollar un efecto útil. De manera que para lograr que el proceso cumpla con sus fines, el principio de progresividad ha tenido un desarrollo histórico evolutivo que generó un efecto expansivo en la incorporación normativa y jurisprudencial de nuevos derechos sustantivos para las partes en los procedimientos, atendiendo a la naturaleza de éstos. Un ejemplo claro del desenvolvimiento evolutivo y garantista del debido proceso es, sin duda, el proceso penal que, con motivo de los fallos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, progresivamente ha incorporado nuevos derechos sustantivos tanto para los imputados como para las presuntas víctimas. En el caso de los primeros, los derechos a contar con una defensa adecuada y la exclusión de la prueba ilícita, los cuales son parte de este importante desarrollo con fines protectores de la dignidad humana. Ahora bien, el desarrollo evolutivo de los derechos referidos ha sido posible porque tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como los instrumentos internacionales en los que se contienen normas en materia de derechos humanos, son instrumentos vivos que han sido interpretados y aplicados a la luz de las circunstancias y necesidades actuales de protección de los derechos humanos. Esta perspectiva ha sido empleada por esta Suprema Corte con la finalidad de que las disposiciones normativas constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos sean efectivas y cumplan cabalmente con su objeto y propósito: la protección de la dignidad humana.

1a. CXXXVI/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 1519/2013. 26 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

Amparo directo en revisión 1520/2013. 26 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Subsección 2.
EJECUTORIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, EN SU CASO, LAS TESIS RESPECTIVAS

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE NOTORIAMENTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO, PUBLICADO EL 9 DE JULIO DE 2014 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ CONCEDER PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2014. MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 4 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de febrero de dos mil quince.

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO.—**Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados**. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Josaphat Martínez Cué, en su carácter de síndico del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

Entidad, poder u órgano demandado:

a) Congreso del Estado de Morelos.

b) Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos.

c) Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos.

d) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

Norma general o acto cuya invalidez se demanda:

1. De la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, reclamo la invalidez del proyecto del decreto condenatorio de fecha 11 de junio de dos mil catorce, que presentó a los integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual, la autoridad señalada anteriormente determina someterlo a discusión, a efecto de que se apruebe:

A) Conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien se desempeñaba como consejero jurídico en la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el periodo comprendido del 16 de noviembre del año 2010 al 28 de noviembre de 2011.

B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que haya dejado de prestar sus servicios para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, **dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones**.

C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

2. De la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, reclamo la invalidez de la aprobación del Decreto condenatorio Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, de fecha 11 de junio del dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado, número 1462, con fecha 26 de junio del 2014; ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO QUE OCASIONARAN A MI REPRESENTADA Y LE OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL ESCRITO DE ESTA DEMANDA; en donde:

A) Determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien se desempeñaba como consejero jurídico en la Consejería Jurídica del H Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el periodo comprendido del 16 de noviembre del año 2010 al 28 de noviembre de 2011.

B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, **dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones**.

C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

3. Del H. Congreso del Estado de Morelos, reclamo la invalidez de la aprobación del Decreto condenatorio Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, de fecha 11 de junio del dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado, número 1462, con fecha 26 de junio del 2014; ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO QUE OCASIONARAN A MI REPRESENTADA Y LE OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL ESCRITO DE ESTA DEMANDA, mediante el cual, la autoridad señalada anteriormente:

A) Determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien se desempeñaba como consejero jurídico, en la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el periodo comprendido del 16 de noviembre del año 2010 al 28 de noviembre de 2011.

B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, **dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones**.

C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

4. Del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, reclamo:

La expedición del Decreto condenatorio, sin previa audiencia, Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, de fecha 11 de junio del dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado, número 1462, con fecha 26 de junio del 2014; ASÍ COMO TODOS SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO QUE OCASIONARAN A MI REPRESENTADA Y LE OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL ESCRITO DE ESTA DEMANDA, mediante el cual, la autoridad señalada anteriormente:

A) Determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien se desempeñaba como consejero jurídico en la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En el periodo comprendido del 16 de noviembre del año 2010 al 28 de noviembre de 2011.

B) La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado, y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, **dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones**.

C) La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente

al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.

SEGUNDO.—**Antecedentes**. En la demanda se señalaron, como antecedentes, los siguientes:

• Que el veintidós de noviembre de dos mil doce, Rogelio Sánchez Gatica presentó un escrito ante el Congreso del Estado de Morelos, por medio del cual solicitó el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, anexando al referido ocurso los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado.

• Que el treinta y uno de mayo de dos mil trece, Sánchez Gatica presentó en la Comisión Legislativa un ocurso por medio del cual –en alcance al escrito primigenio–, solicitó que la cesantía en edad avanzada se tramitara tomando como base el cargo que desempeñó como consejero jurídico de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Cuernavaca, puesto que ocupó antes de ser presidente municipal.

• Que la pensión mencionada se generaría a partir de la entrada en vigor del decreto respectivo, siempre y cuando haya cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez años en el servicio.

• Que una vez que se realizó el procedimiento de investigación respectivo, de conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, estimó que se tenían acreditados a favor de Rogelio Sánchez Gatica, diecisiete años, dos meses y veintisiete días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y setenta años de edad, por lo que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), de la referida ley.

TERCERO.—**Conceptos de invalidez**. La parte actora esgrimió, en síntesis, los siguientes:

1) Que el decreto que se impugna violenta flagrantemente la autonomía municipal contemplada en el artículo 115 del Pacto Federal, puesto que se compromete el patrimonio del Municipio, y sin que se haya oído ni vencido en juicio al promovente en un procedimiento previo, ni con las formalidades esenciales del procedimiento, puesto que los demandados resuelven de manera indebida; asimismo, que al no haberse llamado a juicio al promovente, se violaron en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; asimismo, se infringió el numeral 106 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, puesto que los pro-

yectos de dictamen deben contener, entre otras cosas, el análisis de las observaciones hechas por los Ayuntamientos y los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Así, la demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, envió a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, su dictamen para que se aprobara, el cual se aprobó mediante Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro (1474), de once de junio de dos mil catorce, publicado el nueve de julio de ese mismo año en el Periódico Oficial del Estado; es por ello que la parte demandada violó en perjuicio del demandante las garantías de seguridad jurídica, así como sus derechos de audiencia y de defensa; al efecto sirve de apoyo la jurisprudencia, cuyo rubro es el siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 18060 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y PUBLICADO EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, QUE DECLARA LA DESINTEGRACIÓN DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES, SIN CONCEDER DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA A LA PARTE AFECTADA, ES INCONSTITUCIONAL."

2) Que se violan en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16, 17, 115 y 123 de la Carta Magna, debido a que existe una intromisión del Poder Legislativo del Estado en la vida interna del Municipio, dado que se exige el cumplimiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a favor de **Rogelio Sánchez Gatica**, y que, si bien es cierto que el pago de las pensiones por cesantías en edad avanzada se encuentra contemplado en el título sexto, capítulo único, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, se configura una invasión en la esfera competencial del Municipio promovente que le otorga el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, los Municipios, a través de sus órganos de gobierno que son los Ayuntamientos, gozan de plena autonomía para dirigir los destinos políticos, administrativos y patrimoniales en su circunscripción municipal, disfrutando de facultades para autogobernarse, y sólo por excepción en los casos de suspensión y desaparición de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de los integrantes del Ayuntamiento, podrán intervenir las Legislaturas Estatales, por lo que, si en el caso no se actualiza ninguna de las causas de excepción en el que el Poder Legislativo Local tiene atribuciones constitucionales para intervenir su proceder, conculca la autonomía constitucional consagrada en el artículo 115 de la Carta Magna, y su actuar carece de sustento jurídico, porque ni la Constitución Federal, ni la Estatal, ni alguna ley local le concede facultades para dictar un acuerdo en el sentido del impugnado; por tanto, al pretender aplicar el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil citada, se transgrede la autonomía municipal al hacer uso de facultades que no le corresponden, lo

que implica también la vulneración a los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, porque el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación.

3) Que el artículo 115 de la Carta Magna establece las facultades del Municipio y su facultad para manejar el patrimonio propio; asimismo, los artículos 14 y 16 otorgan las garantías de seguridad jurídica a los gobernados; por su parte el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, viola flagrantemente la autonomía municipal por parte de los demandados, al facultar al Congreso para dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, más aún cuando no fue oída y vencida en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del mismo.

Por lo que es claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando, sin facultad, decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva.

Sin dejar de hacer notar que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, del Municipio actor, al no haber sido llamado al juicio por parte de los demandados, ya que éstos se encontraron constreñidos a hacerlo, pues así se establece en la fracción IV del artículo 106 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos.

Sin embargo, esto no aconteció, pues la demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, su dictamen para su aprobación correspondiente, sin dar intervención al Municipio actor, tal como se desprende del Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", 1474, de 26 de junio de dos mil catorce (2014); es por ello, y toda vez que se violaron en perjuicio del Municipio actor las garantías de seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, por lo que se reclama la invalidez del decreto aludido, ya que los demandados debieron otorgar a mi representada el derecho de audiencia y defensa.

Esta forma de proceder que autoriza la disposición legal reclamada se aparta del principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal que otorga el artículo 115 constitucional, pues no se explica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el Municipio, corresponde a una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, evaluar que se cumpla con todos los requisitos exigidos para que el trabajador del Municipio se

vea beneficiado con una de las distintas pensiones que menciona la ley, con cargo a la hacienda pública del Municipio, el cual deberá modificar sus previsiones presupuestales, no obstante que la Constitución establece que sólo le compete a éste guardar el destino de sus recursos, conforme lo considere conveniente, y sin injerencia de alguna otra autoridad, salvo el caso de los recursos federales que se le asignen y que previamente han sido etiquetados para un fin específico.

Finalmente, el promovente considera que debe declararse la invalidez del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 1474, publicado el 26 de junio de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por el que se determina conceder pensión por cesantía en edad avanzada a Rogelio Sánchez Gatica. Pues es evidente la flagrante violación a la autonomía municipal por parte de los demandados, al dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, más aún cuando no fue oído y vencido en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del procedimiento. Pues es claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando sin facultad decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva.

Al efecto, la parte actora considera que resultan aplicables al caso en concreto, los siguientes precedentes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en diversas fechas, todos bajo el razonamiento toral de que el Congreso del Estado de Morelos no puede determinar la procedencia de montos de las pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, pues ello era contrario al principio de libertad hacendaria municipal.

4) Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del Municipio Libre, y su facultad para manejar su patrimonio conforme a la ley, asimismo, los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan la garantía de seguridad jurídica a los gobernados.

Por lo que resulta claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando sin facultad decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues

desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva. Sin dejar de hacer notar que indebidamente se violaron las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, de mi representada, al no haber sido llamada al juicio por parte de los demandados, ya que éstos se encontraron constreñidos a hacerlo, pues así se establece en la fracción IV del artículo 106 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos.

Sin embargo, esto no aconteció así, pues la demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de Morelos, turnó a la Mesa Directiva del Congreso de Estado de Morelos, su dictamen para su aprobación correspondiente, sin dar intervención al Municipio actor, tal como se desprende del Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", del día 9 de julio de dos mil catorce (2014); es por ello, y toda vez que se violaron en perjuicio del Municipio actor las garantías de seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, por lo que se reclama la invalidez del decreto aludido, ya que los demandados debieron otorgar a mi representada el derecho de audiencia y defensa, el cual debe considerarse como aquel en que se concede a los interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar en su favor, conociendo de los elementos que pudieran motivar la afectación en su patrimonio, que como acontece en el caso concreto al otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada a un particular y de acuerdo a los términos ya mencionados; a fin de obtener, al emitirse la determinación correspondiente, un pronunciamiento específico sobre su defensa; sirve de base a lo anteriormente mencionado la siguiente jurisprudencia sustentada por nuestro Máximo Órgano de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es el siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO NÚMERO 18060 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y PUBLICADO EL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, QUE DECLARA LA DESINTEGRACIÓN DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE ZACOALCO DE TORRES, SIN CONCEDER DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA A LA PARTE AFECTADA, ES INCONSTITUCIONAL."

Que el artículo 113 de la Constitución del Estado de Morelos, es vulnerado por la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, en su artículo 57, último párrafo, al otorgar al Congreso del Estado una atribución que lesiona la hacienda municipal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en su artículo 38, fracciones LXIV, LXV y LXVI, en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, al prever que la Legislatura Local fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores municipales, así como la cuantía a la que deberán ascender aquéllas, es facultad de los Ayuntamientos y no del Congreso del Estado.

Así, el promovente considera que debe declararse la invalidez del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario al artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación contenido en el Decreto Número 1474, publicado el 9 de julio de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, por el que se determina conceder pensión, por cesantía en edad avanzada, a Rogelio Sánchez Gatica. Pues es evidente la flagrante vulneración a la autonomía municipal, por parte de los demandados, al dictar un decreto que compromete el patrimonio municipal, más aún cuando no fue oído y vencido en un procedimiento previo y con las formalidades esenciales del mismo. Pues es claro que los resolutivos condenatorios de los demandados son totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la libre administración municipal, tomando sin facultad decisiones contrarias al precepto invocado, acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues desequilibra los presupuestos cuya administración es su facultad exclusiva.

CUARTO.—**Artículos constitucionales señalados como violados**. Los preceptos que la parte actora estima violados son 14, 16, 17, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—**Trámite de la controversia**. Por acuerdo de treinta de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil catorce, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 74/2014, y determinó que una vez que diera inicio el segundo periodo de sesiones, correspondiente al año en cita, enviaran los autos a la presidencia de este Alto Tribunal para que determinara lo relativo al turno de este asunto.

Asimismo, en el mismo proveído, de treinta de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas admitió la demanda de controversia constitucional, en la que se tuvo por impugnado, además del Decreto Número 1472, publicado el veintiséis de junio de dos mil catorce en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Gobierno del Estado de Morelos, el último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, y no así, a la Mesa Directiva ni a la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo, ambos del Congreso del Estado de Morelos. Se ordenó emplazar a los Poderes demandados para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que emitiera

la opinión que le corresponde, así como formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.

SEXTO.—**Contestación de la demanda**.

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos dio contestación a la demanda, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Se opone la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, toda vez que carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer correlativamente, se opone la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo del Estado, al no haber realizado acto alguno que afecte o invada la esfera competencial del demandante.

Adujo que el Municipio actor atribuye únicamente al Poder Ejecutivo del Estado, la promulgación y publicación del decreto que impugna. Al respecto, señaló que tales actos se realizaron de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Estatal, además de que el demandante no los combate por vicios propios.

Por lo que consideró que deben declararse inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez formulados por el actor, pues lo expuesto en su demanda resulta ambiguo y superficial, y se concreta en descalificaciones aisladas, dado que no señala ni concreta razonamiento alguno capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, al no referirse al fundamento, argumentos o razones decisorias, o argumentos, y al porqué de su reclamación.

Así –arguye el demandado–, resulta infundado lo alegado por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda y la libre administración de ésta, pues, en términos del último párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal, se ha dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sea el Congreso Local el facultado para emitir los decretos de pensión de los servidores públicos.

Todos los Municipios prevén en sus presupuestos de egresos el rubro de pensiones, por lo que el decreto de pensión únicamente consiste en un acto declarativo que emite la Legislatura Estatal conforme al derecho de los trabajadores a la seguridad social, y de acuerdo con las hipótesis y porcentajes respectivos, enmarcados dentro de los principios de libertad de configuración de los Estados, división de poderes y hacienda municipal, que rigen en un Estado social de derecho.

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos, entre las que se encuentran la jubilación y los seguros de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, y las demás disposiciones del apartado B de la Constitución Federal.

Por su parte, el decreto impugnado no es en sí mismo inconstitucional, dado que las partidas del presupuesto de egresos municipal, para el pago de las prestaciones de seguridad social, no pueden considerarse dentro del ámbito de la libre administración hacendaria, previsto en el artículo 115, fracción IV, constitucional, al tener que destinarse a cubrir una obligación impuesta en la fracción VIII del propio precepto, en relación con el diverso 123 de la Norma Fundamental.

En efecto, la libre administración hacendaria permite a los Municipios integrar sus presupuestos de egresos con los recursos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que en este ámbito del ejercicio del gasto público no caben injerencias estatales que establezcan una aplicación específica presupuestal.

En este sentido, puede afirmarse que la hacienda municipal se compone de un sinnúmero de ingresos provenientes de distintas fuentes, pero sólo quedan comprendidos dentro de la libertad de elección en su destino y aplicación los que deriven de actividades públicas y privadas de los Municipios, así como los que se incluyan en esa categoría de libre administración hacendaria como las participaciones, pues existen ciertos ingresos que forman parte de la hacienda municipal, tienen una aplicación específica sin que el Ayuntamiento pueda variar este manejo, porque no se integran a la autonomía en el gasto público –aportaciones–, y otros que, aun integrándose a esta autonomía, ven limitada su libre aplicación, al tener que destinarse al cumplimiento de una obligación pecuniaria establecida por la Constitución Federal.

Al respecto, señaló que a las Legislaturas Locales se les facultó para regular las relaciones laborales de los Estados y los Municipios con sus trabajadores, observando los lineamientos establecidos en el artículo 123 constitucional, entre ellos, la protección al salario [fracciones VI, VIII, X y XXVII, incisos b) y f), del apartado A, y correlativos del apartado B] y a la seguridad social (fracción XXIX del apartado A, y fracción XI del apartado B) que, como se ha señalado, comprende la jubilación y los seguros de invalidez, vejez y muerte.

De este modo, el marco establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, no vulnera la libertad de administración hacendaria del Municipio actor, pues a dicha prestación económica está obligado por disposición expresa de la Constitución Federal, debiendo cubrirla por sí o por medio de la institución respectiva, a través de las aportaciones de seguridad social que se contemplen en la partida presupuestal correspondiente.

Aunado a lo anterior, los artículos 56 y 57 de la citada ley, sólo prevén que el Congreso Local será el órgano facultado para otorgar la pensión y la fecha en que deberá expedirse el decreto respectivo, por lo que, por sí solos, no trascienden al ámbito de la libre administración hacendaria municipal; resultando aplicables las consideraciones sostenidas en la sentencia dictada en la controversia constitucional 80/2011, en las que se reconoció que el referido órgano legislativo es el competente para determinar las prestaciones sociales en la entidad.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política y 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ambas del Estado de Morelos, los Ayuntamientos, en sus respectivos presupuestos de egresos, deben contemplar las partidas necesarias para el pago de las obligaciones que tienen a su cargo, lo cual no vulnera el libre manejo de la hacienda municipal, pues el artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal establece que los Municipios deberán regir las relaciones laborales con sus trabajadores, en términos de las leyes que expidan las Legislaturas Locales, con apoyo en lo previsto por el artículo 123 de la propia Constitución y sus disposiciones reglamentarias.

De esta forma, la libertad de administración de la hacienda municipal no es ilimitada o absoluta, pues su ejercicio debe ajustarse a lo dispuesto por la Constitución y las leyes; resultando aplicable, a este respecto, la jurisprudencia P./J. 5/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."; asimismo, la tesis P. LXXXIII/99, de rubro: "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."

Finalmente, el Poder Ejecutivo demandado estima que resulta incorrecto lo expuesto por el Municipio actor respecto de la seguridad social, pues el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, sólo establece

las bases conforme a las cuales ésta debe organizarse, mas no determina formas, procedimientos o modalidades para tal objetivo, ya que deja que las leyes secundarias sean las que regulen estas cuestiones.

Del mismo modo considera que es infundado que se viole, en perjuicio de la parte actora, lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en virtud de que no se viola ni la autonomía de su hacienda ni la libre administración hacendaria.

Puesto que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor como servidores públicos y, en su caso, tengan a bien jubilarse, se establecen los medios y parámetros para determinar esta prerrogativa, ya sea de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y de accidentes, todo esto en estricta relación con la fracción XXIX del artículo 123, apartado A, y las demás disposiciones del apartado B, ya que este último regula las relaciones de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y los Estados.

El decreto impugnado no es en sí mismo inconstitucional, debido a que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 40, fracciones XV, XX, XXIX y XLIX, faculta al Poder Legislativo del Estado, a expedir las leyes y decretos de carácter municipal.

2. Contestación a la demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al no contar el actor con interés legítimo para promover la presente controversia por no causársele perjuicio.

Con la expedición del decreto impugnado, el Congreso del Estado no pretende, en modo alguno, ejercer de manera directa los recursos que integran la hacienda municipal. Los artículos 123, apartado B, de la Constitución Federal, 40, fracción XX, de la Constitución Local y 54, fracción VII, y 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo facultan para expedir los decretos que otorguen a los trabajadores del Gobierno Estatal y de los Municipios del Estado de Morelos, pensiones por cesantía en edad avanzada, jubilación, viudez, orfandad, etcétera, por lo que en ningún momento invade la esfera competencial del actor, prevista en el artículo 115, fracción IV, de la propia Carta Magna.

Es obligación de los Municipios prever una partida en sus presupuestos para el pago de pensiones, por lo que el actor no puede válidamente aducir que, dada su autonomía, a él corresponde decidir si contempla o no dicha partida. El artículo 123 de la Constitución Federal establece los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones; específicamente, en su apartado B, y en relación con el artículo 127 del propio ordenamiento, aquellos relacionados con los trabajadores al servicio del Estado, dejando en claro la forma que habrán de estipularse tales jubilaciones.

Los Municipios tienen limitantes y deben regirse por el principio de subordinación jerárquica, de conformidad con la tesis P./J. 132/2005, de rubro: "MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA."

b) Se actualiza, asimismo, la causal de improcedencia antes referida, al no ser la controversia constitucional la vía idónea para combatir el decreto impugnado, ya que éste fue emitido por el Congreso del Estado, en ejercicio de una función meramente administrativa y conforme a las facultades que le confiere la Ley del Servicio Civil Estatal, por lo que, someter a revisión constitucional este tipo de conflictos, haría de la controversia un recurso para dirimir cuestiones relacionadas con derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, que deben ser resueltas a través de los medios de defensa previstos en las leyes procesales respectivas.

c) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los Municipios no pueden dejar de cubrir sus obligaciones obrero-patronales.

Argumenta que el Decreto Número 1474, fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece, en los artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66, el procedimiento para que los trabajadores estatales o municipales obtengan la pensión que les corresponde, la naturaleza jurídica de sus derechos adquiridos, y quiénes son los obligados en materia de prestaciones sociales.

En el caso, Rogelio Sánchez Gatica, mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil doce ante el Congreso Estatal, solicitó pensión por cesantía en edad avanzada, para lo cual acompañó a su solicitud los documentos referidos en el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado.

Que, al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se

encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación.

Asimismo, se demuestra la antigüedad del trabajador, 17 años, 02 meses, 27 días de servicio efectivo de trabajo, y 70 años de edad, ya que nació el 4 de julio de 1942; misma que da la posibilidad de otorgarle pensión por cesantía en edad avanzada, la que deberá cubrirse al 75% del último salario, tal como lo manda el artículo 59, inciso a), de la Ley del Servicio Civil.

Aduce que, al haber cumplido el peticionario con todos los requisitos previstos por la ley, tal como se aprecia de la copia certificada del expediente formado con motivo del decreto impugnado, queda de manifiesto que no existía motivo para que el Congreso del Estado de Morelos se negara a emitir el decreto respectivo, ya que tiene la ineludible obligación de emitir dicho decreto, puesto que así se lo impone el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil, así como el numeral 40 de la Constitución Política del Estado.

Por lo que hace a los argumentos en torno a la procedencia de la controversia constitucional, menciona que, por cuanto a la norma general o acto de invalidez que la demandante señala como tal, precisamente el decreto impugnado, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada, cuyo acto se reclama al Congreso del Estado, se hace notar que el Municipio actor en ningún momento precisa qué parte del decreto adolece de validez, sino todo lo contrario, se alega que el acto de invalidez es el decreto, mas no la parte considerativa del acto, razón por la cual, resulta improcedente la reclamación planteada por el demandante.

Por otra parte, el actor señala que se violaron en su perjuicio el precepto constitucional 115, empero, como se plantea, el acto de invalidez, por sí solo, no le causa perjuicio alguno al actor, esto es, el decreto impugnado por el que se concede la pensión por cesantía en edad avanzada, en forma literal no le causa ningún perjuicio, ni mucho menos la expedición literal de dicho decreto, esto es, al demandante no se le causa perjuicio por cuanto a la forma del acto ni el contenido del acto y sus efectos que produce y, en tal sentido, no se violan en su perjuicio los preceptos constitucionales mencionados.

Argumenta que la libre administración hacendaria es una facultad constitucional concedida a los Ayuntamientos municipales para integrar su presupuesto de egresos, que comprende el manejo y aplicación de los

recursos públicos, esto es, son autónomos en decidir qué destino tendrán los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que, en el ámbito del ejercicio del gasto público, no caben injerencias estatales que establezcan una aplicación específica presupuestal.

Afirma que son autónomos en determinar la aplicación de los recursos públicos, porque para tal efecto deben observar las normas constitucionales y federales relativas, además de las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la organización de la administración pública municipal, entre ellas, las que normen el presupuesto y gasto público municipal basado en programas que señalen los objetivos, metas, beneficios y ejecución del gasto, por lo que en realidad se trata de la libre elección en el destino y monto de los recursos públicos disponibles, salvo que sea la propia Carta Fundamental la que prevea cubrir una obligación monetaria, ya que, en este supuesto, a pesar de que se cumpla con ingresos públicos de su hacienda, no opera a plenitud esa libertad municipal, porque no pueden dejar de acatarla.

Que no puede concebirse que, bajo el esquema de la libre administración hacendaria, los Municipios soslayen el pago de prestaciones monetarias que impone la propia Constitución, porque se tornarían en unidades políticas independientes regidas por sus propios principios y convicciones, sin apego a ningún marco legal, llegándose a extremos arbitrarios en el manejo y aplicación de los ingresos públicos; por ende, en esta hipótesis se reduce el margen de maniobra en el destino de los recursos, por así disponerlo otra norma constitucional, como bien se destaca en la fracción VIII del artículo 115 constitucional, que establece el sistema laboral y de seguridad social de trabajadores municipales, sustentado en las bases primarias del diverso 123.

Que de este modo, a las Legislaturas Locales se les facultó para regular las relaciones laborales suscitadas tanto entre los trabajadores al servicio del Estado federado, como entre los Municipios y sus trabajadores, respetando los lineamientos establecidos en el artículo 123 constitucional, entre ellos, la protección al salario que establecen las fracciones VI, VIII, X y XXVII, incisos b) y f), del apartado A, y sus correlativos del apartado B, y la seguridad social prevista en la fracción XXIX del primer apartado, y la fracción XI del segundo, que abarca la jubilación y el seguro de jubilación, vejez y muerte.

En tal virtud, es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada, no vulnera la libre administración hacendaria del Municipio de Cuernavaca, Morelos, pues dicha prestación económica está

a su cargo por mandato expreso de la propia Constitución Federal, de modo que tiene que cubrirla por sí o por medio de la institución respectiva, aun con ingresos públicos, ya que, en su caso, deberá realizar las aportaciones de seguridad social a través de la partida fijada en el presupuesto de egresos, de ahí que si se trata de una obligación o exigencia constitucional que ineludiblemente debe satisfacer, no puede operar a plenitud la libertad concedida a los Ayuntamientos en la administración de los recursos públicos, al mismo tiempo que el Congreso del Estado de Morelos solamente tiene facultades para otorgarla, al igual que lo hacen los institutos de seguridad social federales.

Que al haber cumplido el peticionario de pensión con todos los requisitos previstos por la ley, tal como se aprecia de la copia certificada del expediente formado con motivo de los decretos impugnados, no existe motivo alguno para que el Congreso del Estado de Morelos se niegue a emitir los decretos respectivos, ya que tiene la ineludible obligación de emitirlos.

Finalmente, arguye que a través de la controversia constitucional no puede plantearse la invalidez del decreto impugnado, emitido por el Congreso del Estado, actuando con funciones eminentemente administrativas y en cumplimiento al mandato a la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que no puede considerarse a ésta, como la vía idónea para analizar las actuaciones que realiza el Congreso del Estado en ejercicio de las aludidas facultades, pues, considerar lo contrario, daría lugar a que la controversia constitucional sea un recurso para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, y, en este caso, no se dirimen conflictos entre los entes, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, sino que su objeto es salvaguardar los intereses de los gobernados, con independencia de las disposiciones legales o reglamentarias que al efecto se llegasen a aplicar.

SÉPTIMO.—**Opinión del procurador general de la República**. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO.—**Audiencia**. Agotado el trámite respectivo el veintitrés de octubre de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—**Avocamiento**. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil

catorce, dictado por el Ministro presidente de la Primera Sala, se AVOCÓ al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar nuevamente los autos a la ponencia de la adscripción del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia**. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Morelos, por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el Municipio de Cuernavaca de esa entidad, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal en Pleno.

SEGUNDO.—**Precisión de la litis**. En el resultando primero de esta ejecutoria, se indicó que el Municipio actor conforme al capítulo correspondiente de su escrito de demanda, impugnó lo siguiente:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley de la materia,[1] se examinan, de manera integral en su conjunto, los razonamientos expuestos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, lo cual hace necesario que se consideren todos los argumentos propuestos por la actora para esclarecer cuáles son los actos que se impugnan.

Así, lo impugnado en este asunto es:

Norma impugnada:

El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

[1] "**Artículo 39.** Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada."

Acto impugnado:

El Decreto Número 1474, de once de junio de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el nueve de julio de dos mil catorce, mediante el cual, el Congreso del Estado, otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Rogelio Sánchez Gatica.

TERCERO.—**Oportunidad**. Procede analizar, si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

Como se precisó anteriormente, el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, impugna lo siguiente:

a) El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

b) El Decreto Número 1474, de once de junio de dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el nueve de julio de dos mil catorce, mediante el cual, el Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Rogelio Sánchez Gatica.

El artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, constituye una norma general, toda vez que cuenta con los elementos de generalidad y abstracción, al ser aplicable a todo sujeto que se coloque en la hipótesis normativa y no encontrarse dirigido a un caso particular, ni agotarse al momento de su aplicación.

En tanto, el Decreto Número 1474, mediante el cual, el Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Rogelio Sánchez Gatica, constituye un acto en sentido estricto, por referirse a una situación particular y concreta.

Atento a lo anterior, a efecto de determinar si la demanda fue promovida oportunamente respecto de la norma impugnada, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que establece que, tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al

de la fecha de su publicación o al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.[2]

En el caso, atendiendo a la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, la impugnación del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil Estatal, resulta notoriamente extemporánea, toda vez que su texto data del seis de septiembre de dos mil, sin haber sufrido reformas desde esta fecha.[3]

---

[2] "**Artículo 21.** El plazo para la interposición de la demanda será:
"…
"**II.** Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

[3] "**Artículo 57.** Para disfrutar de las pensiones señaladas en este capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes:
"…
"(NOTA 1: EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2010, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LOS CONSIDERANDOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO ASÍ COMO EN LOS RESOLUTIVOS SEGUNDO Y CUARTO, SEGÚN CORRESPONDA, DE LAS SENTENCIAS DICTADAS AL RESOLVER LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 90/2008, 91/2008 Y 92/2008, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE ESTE PÁRRAFO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHAS SENTENCIAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA *http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/*) [En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez ver la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro y datos de identificación: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.' (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P./J. 72/96, página 249)]
"(NOTA 2: EL 3 DE MAYO DE 2012, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL CONSIDERANDO NOVENO ASÍ COMO EN EL RESOLUTIVO SEGUNDO, DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2010, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE ESTE PÁRRAFO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 3 DE MAYO DE 2012 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHAS SENTENCIAS PUEDEN SER CONSULTADAS EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA *http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/*) [En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez ver la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro y datos de identificación: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.' (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P./J. 72/96, página 249)]
"(NOTA 3: EL 20 DE MAYO DE 2014, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL CONSIDERANDO OCTAVO Y EL RESOLUTIVO TERCERO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2013, DECLARÓ LA INVALIDEZ DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE ESTE ARTÍCULO INDICADO CON MAYÚSCULAS, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 21 DE MAYO DE 2014 DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA

Por otro lado, si se considera que el citado precepto se impugna con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el Decreto Número 1474, también impugnado, se advierte que, aunque éste fue expedido con fundamento en dicho artículo, no constituye el primer acto de aplicación del mismo en perjuicio del Municipio actor, pues de la revisión del Periódico Oficial del Estado, se desprende que le había sido aplicado con anterioridad, ya que el cinco de diciembre de dos mil doce aparece publicado el Decreto Número 91, mediante el cual, el Congreso del Estado otorgó pensión por cesantía en edad avanzada a Ernesto Galindo Reyes, con cargo a la partida destinada para pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Asimismo, es un hecho notorio, para esta Primera Sala, que dicho decreto fue aplicado en perjuicio del Municipio actor en los siguientes decretos:

1. El Decreto Número 418, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el diez de abril de dos mil trece, mediante el cual, el Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Francisco Damián Pedroza. Mismo que fue impugnado mediante la controversia constitucional 76/2013;

2. El Decreto Número 485, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el veinticuatro de abril de dos mil trece, mediante el cual, el Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Javier González Ibarra. Mismo que fue impugnado mediante la controversia constitucional 77/2013; y,

---

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA *http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/*) [En cuanto a los efectos de esta declaración de invalidez ver la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identificación: 'CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.' (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo IV, noviembre de 1996, tesis P./J. 72/96, página 249)]
'CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS EFECTOS GENERALES DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, DEPENDEN DE LA CATEGORÍA DE LAS PARTES ACTORA Y DEMANDADA.' (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo IX, abril de 1999, materia constitucional, tesis P./J. 9/99, página 281)
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DEBERÁ EXPEDIR EL DECRETO CORRESPONDIENTE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE TENGA POR RECIBIDA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU TRAMITACIÓN, EN UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS DURANTE EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. EN CASO DE QUE LA LEGISLATURA SE ENCUENTRE EN RECESO, DEBERÁ CONTABILIZARSE DICHO TÉRMINO A PARTIR DE QUE INICIE EL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES INMEDIATO."

3. El Decreto Número 1022, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el cuatro de diciembre de dos mil trece, mediante el cual, el Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en edad avanzada a Francisco León Guzmán. Mismo que fue impugnado mediante la controversia constitucional 3/2014.

En este sentido, el referido Decreto Número 1474 constituye un ulterior acto de aplicación de la norma impugnada, en contra del cual, la controversia constitucional resulta improcedente, tal como se desprende de la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XXIV, noviembre de 2006
"Tesis: P./J. 121/2006
"Página: 878

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.—Del artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que para impugnar normas generales en vía de controversia constitucional es menester que la demanda se interponga dentro del plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación en perjuicio del actor. En consecuencia, es improcedente dicha impugnación si se trata de un segundo o ulterior acto de aplicación, una vez transcurrido el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la norma general, pues ello se traduce en una manifestación de voluntad del actor que entraña su consentimiento tácito."

Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia,[4] debiendo sobreseerse en la presente controversia respecto del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado, en términos del artículo 20, fracción II, del propio ordenamiento.[5]

---

[4] "**Artículo 19.** Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"**VII.** Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."
[5] "**Artículo 20.** El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
"...

Ahora bien, por lo que respecta al propio Decreto Número 1474, que igualmente se impugna, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, que establece que, tratándose de actos, el plazo para la promoción de la controversia constitucional será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.[6]

El Municipio actor tuvo conocimiento del decreto impugnado, con motivo de su publicación en el Periódico Oficial del Estado el nueve de julio de dos mil catorce; por tanto, el plazo para promover la demanda transcurrió del diez de julio al cinco de septiembre de dos mil catorce, descontándose los días doce y trece de julio, así como dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de agosto, por ser sábados y domingos, y los días dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil catorce, por corresponder al periodo de receso de esta Superioridad, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General del Tribunal Pleno Número 18/2013.

Luego, si la demanda de controversia constitucional se presentó ante este Alto Tribunal el treinta de julio de dos mil catorce, respecto del decreto en cita fue promovida oportunamente.

CUARTO.—**Legitimación activa**. A continuación se estudiará la legitimación de quien promueve la demanda en la presente controversia constitucional:

El artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece:

"**II.** Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."

[6] "**Artículo 21**. El plazo para la interposición de la demanda será:

"…

"**I.** Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

De la disposición legal transcrita, se desprende que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

En el presente asunto, suscribe la demanda en representación del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, Fernando Josaphat Martínez Cué, en su carácter de síndico municipal, lo que acredita con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida el siete de julio de dos mil doce por el Consejo Municipal Electoral, documental de la que se desprende que fue electo para ocupar tal cargo (foja diecinueve del expediente).

Los artículos 38, fracción II, y 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establecen lo siguiente:

"Artículo 38. Los Ayuntamientos tienen a su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por lo cual están facultados para:

"...

"II. Promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que señale la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las controversias constitucionales."

"Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento que, además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; teniendo, además, las siguientes atribuciones:

"...

II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; represen-

tar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aun revocarlos."

Del contenido de esta disposición, se desprende que el síndico tiene la representación jurídica de los Municipios en todos los procesos judiciales, por lo que procede reconocerle legitimación para promover el presente juicio; además de que el Municipio es uno de los entes legitimados para promover una controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal.

QUINTO.—**Legitimación pasiva**. Acto continuo, se analizará la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dicha parte es la obligada por ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, en caso de resultar ésta fundada.

Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional:

1. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

2. El Poder Legislativo del Estado de Morelos.

Los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia establecen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"…

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiera emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la repre-

sentación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

1. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos comparece a juicio por conducto de Octavio Ibarra Ávila, en su carácter de director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento, de catorce de febrero de dos mil trece.

Al efecto, el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos establece lo siguiente:

"Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:

"...

"II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Asimismo, el artículo 15, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos establece:

"Artículo 15. Son atribuciones de la persona titular de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo, las siguientes:

"I. Intervenir con la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado en todos los juicios o negocios en que participe como parte o con cualquier carácter que afecten su patrimonio o tenga interés jurídico en materia procesal constitucional;

"**II. Representar, con el carácter de apoderado legal, al gobernador , y a las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal, en todos los asuntos de orden constitucional en que sean parte.**"

Por lo que, quien signa la contestación de demanda, cuenta con la representación que ostenta y el Poder Ejecutivo Local tiene legitimación pasiva

para intervenir en esta controversia constitucional, al atribuirse a dicho poder la publicación del decreto impugnado.

2. El Poder Legislativo del Estado de Morelos comparece a juicio por conducto de Lucía Virginia Meza Guzmán, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, lo que acredita con la copia certificada del acta de la sesión extraordinaria celebrada el ocho de agosto de dos mil catorce, de la que se desprende que fue electa para ocupar tal cargo, por el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil catorce al treinta y uno de agosto de dos mil quince.

Por su parte, el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos establece que el presidente de la mesa directiva es el representante legal del Congreso Local:

"**Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:**

"...

"**XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general, en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al Pleno del Congreso del Estado.**"

En consecuencia, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos se encuentra legitimada para comparecer en el presente juicio, en representación del Poder Legislativo del Estado, al que se atribuye la expedición del decreto impugnado.

SEXTO.—**Causas de improcedencia**. Procede analizar las causas de improcedencia hechas valer por las autoridades demandadas, Congreso del Estado de Morelos y el Ejecutivo de esa entidad federativa, según se razona a continuación:

Las autoridades demandadas adujeron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria

de la materia,[7] al carecer de interés legítimo el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, en virtud de que el decreto combatido no provoca afectación alguna en su esfera de competencia.

Debe desestimarse dicha causa de improcedencia, porque la determinación de la afectación que genera a la hacienda pública municipal la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión a favor de un trabajador municipal, es una cuestión que involucra el estudio del fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99,[8] de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

Asimismo, el Congreso manifiesta que la controversia constitucional es improcedente, en virtud de que no es la vía idónea para impugnar pensiones de trabajadores.

Esta causa de improcedencia resulta infundada, en virtud de que lo que se impugna no es propiamente la pensión, sino la violación a la libertad hacendaria y a la autonomía municipal por parte del Congreso del Estado, al imponerle cargas económicas mediante un procedimiento de determinación de pensiones en el que no tiene participación, lo que se considera violatorio del artículo 115 constitucional, aspectos que son analizables en este juicio.

Al no haberse planteado por las partes ninguna otra causa de improcedencia, ni advertirse de oficio alguna otra por esta Primera Sala, se procede al estudio del fondo del asunto.

---

[7] "**Artículo 19.** Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley."

[8] "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.—En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas." (*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Pleno, Tomo X, septiembre de 1999, tesis P./J. 92/99, página 710)

SÉPTIMO.—**Estudio**. En los conceptos de invalidez que han quedado transcritos en el resultando tercero de esta sentencia, el Municipio actor aduce, sustancialmente, que el Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, viola la autonomía municipal prevista en el artículo 115 de la Constitución Federal, en virtud de que el Poder Legislativo del Estado de Morelos ordenó el pago de pensión por cesantía en edad avanzada respecto de una persona que laboró en ese Municipio, con cargo a su presupuesto, sin haber escuchado o tomado en cuenta al propio Ayuntamiento; es decir, por medio de dicho acto, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso del presupuesto del Municipio, lo que en su concepto, se traduce en que una autoridad diversa a la municipal decidió sobre el patrimonio propio del Ayuntamiento, sin tomar en cuenta la opinión de éste y la afectación que pudiera implicar una determinación de esa naturaleza. Que al pretender aplicar el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil en cita transgrede la autonomía municipal, al hacer uso de facultades que no le corresponden, vulnerando los preceptos 14 y 16 de la Carta Magna, porque el decreto impugnado carece de fundamentación y motivación, y la garantía de seguridad jurídica.

El argumento anterior es **fundado**.

En principio, es menester señalar que el decreto impugnado en la controversia constitucional, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el nueve de julio de dos mil catorce, es del tenor siguiente:

"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: 'Tierra y Libertad'.—La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo.—LII Legislatura. 2012-2015.

"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed:

"La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:

"Considerandos:

"...

"Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro

"Artículo 1o. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada al C. Rogelio Sánchez Gatica, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

"Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante como consejero jurídico, de conformidad con el inciso f), del artículo 59, de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59, de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Artículo 3o. La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado.

"Transitorios:

"Artículo primero. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

"Artículo segundo. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

"Recinto Legislativo a los once días del mes de junio de dos mil catorce.

"Atentamente. Los CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. Secretario. Rúbricas.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil catorce.

"'Sufragio efectivo. No reelección'
"Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos: Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. Secretario de Gobierno: Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén. Rúbricas."

Al respecto, cabe señalar que en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008,[9] el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en relación con actos como el que ahora nos ocupa, y por mayoría de ocho votos, se determinó que el hecho de que el Congreso de Morelos fuese exclusivamente el órgano encargado de determinar la procedencia y montos de las pensiones de los trabajadores de un Ayuntamiento, transgrede el principio de libertad hacendaria municipal al permitir una intromisión indebida en el manejo del destino de los recursos municipales, criterio que resulta obligatorio para esta Sala, en términos del artículo 43 de la ley reglamentaria de la materia.[10]

En las consideraciones sostenidas en dichos asuntos se afirmó que las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales estatales el mecanismo legal para que sus trabajadores accedan a dichas prestaciones, pues si ese derecho está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su regulación debe ser atendida puntualmente, y sólo debe verificarse que al hacerlo no se lesione alguna facultad municipal.

De esta forma, se sostuvo que en el Estado de Morelos, no son los Ayuntamientos de los Municipios, ni alguna institución de seguridad social los encargados de establecer los casos en que procede otorgar alguna de las

---

[9] Las demandas de controversia constitucional 55/2005 y 89/2008, se presentaron por el Municipio de Xochitepec, y se resolvieron el 24 de enero de 2008, y el 8 de noviembre de 2010, respectivamente. La controversia constitucional 90/2008, se promovió por el Municipio de Zacatepec, la diversa 91/2008, por el Municipio de Jiutepec, y la 92/2008, por el Municipio de Ixtla, resolviéndose los tres juicios el 8 de noviembre de 2010.

[10] "**Artículo 43.** Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales."

pensiones de seguridad social, sino que corresponde al Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad y atendiendo exclusivamente a la solicitud que le formule el interesado, determinar la procedencia de alguna de esas prestaciones, señalando el monto a que ascenderá, no obstante que la relación de trabajo no haya subsistido con el Gobierno Estatal, sino con uno Municipal o con ambos.

Conforme al artículo 115 de la Constitución Federal, las Legislaturas Estatales son las que tienen que emitir las leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores; asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del mismo Ordenamiento Federal, deben emitir las leyes para regir las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado y el Estado mismo.

En estas condiciones, cuando en dichos instrumentos normativos se prevén las cuestiones relativas a diversas pensiones en materia de seguridad social, se cumple con el contenido del artículo 127, fracción IV, constitucional,[11] sin que esto signifique que sean los órganos legislativos los que deban otorgar las pensiones.

Así, el requisito del referido artículo 127, se cumple con el hecho de que en la ley se establezca que los trabajadores municipales tendrán determinadas pensiones en materia de seguridad social (jubilación, invalidez, cesantía en edad avanzada, etcétera); sin embargo, en dicho precepto constitucional no se ha dispuesto que las Legislaturas Estatales pueden direccionar recursos y determinar pensiones de manera unilateral.

Se afirmó que el régimen de pensiones debe necesariamente considerarse en las leyes que expidan las Legislaturas Locales, pero ello no implica

---

[11] "**Artículo 127.** Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
"...
"IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado."

que a través de las mismas, el Congreso Local pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y quienes fungieron como servidores públicos a su cargo, pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos facultó a los Ayuntamientos para ejercer en forma directa los recursos, de la hacienda municipal, esto es, sin intermediarios.

Este principio de administración directa tiene como finalidad que los Municipios tengan libre disposición y aplicación de sus recursos a fin de satisfacer sus necesidades, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de los recursos, sin que se vean afectados por intereses ajenos.[12]

Es claro que el diseño del régimen presupuestal municipal corresponde en exclusivo a los Ayuntamientos, con base en los recursos disponibles previstos en las Leyes de Ingresos respectivas aprobadas por las Legislaturas Locales, como se indica expresamente en los dos párrafos finales de la fracción IV del artículo 115 constitucional.

Y si bien es cierto que los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan que el régimen de pensiones para los trabajadores estatales y municipales debe necesariamente considerarse por las Legislaturas Locales, esto no implica que el Congreso Local de Morelos pueda determinar unilateralmente los casos en que proceda otorgar dichas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y quienes fungieron como servidores públicos a su cargo, en atención a que los Municipios ejercen en forma directa los recursos de su hacienda.

El Tribunal Pleno enfatizó que en el caso, no se estima inconstitucional la existencia y necesaria regulación de los derechos de seguridad social, pues

---

[12] Sobre este tema, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en diversas tesis de jurisprudencia, entre las cuales se encuentran la P.J. 5/2000 y P.J. 6/2000, de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).", consultables en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, páginas 515 y 514, respectivamente.

se trata de una exigencia constitucional de establecer en las leyes locales un régimen de pensiones, sino que lo que se estima incompatible con el artículo 115 de la Constitución General, es que el nivel de Gobierno Estatal decida lo correspondiente a los trabajadores del orden de Gobierno Municipal, para que éste erogue los recursos de su presupuesto a fin de solventar las obligaciones en dicha materia.

En este sentido, pese a que existe la obligación de que la ley contemple y regule las pensiones de los trabajadores estatales y municipales, esta forma de proceder que autoriza la normativa legal local se aparta del principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal que otorga a ese nivel de gobierno el artículo 115 constitucional, pues no se justifica por qué si los trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con las municipalidades, es una autoridad ajena como el Congreso Local, a quien se le confió la atribución de evaluar el tiempo de servicios, el salario percibido, la edad del servidor público y todos los demás requisitos para verse favorecidos con una pensión con cargo al erario municipal administrado por un Ayuntamiento, quien, en este aspecto, se ve obligado a modificar sus previsiones presupuestales, no obstante que constitucionalmente sólo a él le compete graduar el destino de sus recursos disponibles, conforme lo considere conveniente y sin injerencia de alguna otra autoridad, salvo el caso, claro está, de los recursos federales previamente etiquetados para un fin específico.

Una parte de las anteriores consideraciones se encuentra plasmada en la jurisprudencia plenaria P./J. 13/2013 (10a.), que enseguida se cita:

"HACIENDA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL CONFERIR AL CONGRESO LOCAL FACULTADES EN MATERIA DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—De conformidad con el párrafo último del citado artículo 57, el Congreso del Estado de Morelos es el órgano resolutor en materia de pensiones de los trabajadores municipales, al facultársele para expedir el decreto relativo, lo cual viola el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues otorga a la Legislatura Estatal una atribución que vulnera la hacienda municipal y, en consecuencia, la autonomía de gestión del Municipio en el manejo de sus recursos. Lo anterior es así, ya que la intervención del Poder Legislativo de la entidad en la determinación de las referidas pensiones, constituye una forma de disposición y aplicación de los recursos municipales, incluso sin la intervención del Ayuntamiento, de manera tal que el Congreso Local podría disponer de recursos ajenos a los del Gobierno Estatal para sufragar el pago de dichas prestaciones,

sin dar participación al órgano que debe realizar la previsión económica respectiva." [*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Pleno, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, tesis P./J. 13/2013 (10a.), página 153]

Ahora bien, de la lectura del decreto impugnado se advierte que la pensión por jubilación decretada por el Congreso del Estado de Morelos, deberá ser cubierta por el Municipio de Cuernavaca, con cargo a su erario, lo cual representa una determinación del destino de una parte del presupuesto de la municipalidad, de tal suerte que es exclusivamente el Congreso Local, quien dispone de recursos ajenos a los del Gobierno Estatal para enfrentar el pago de dichas pensiones, sin dar participación a quien deberá hacer la provisión económica respectiva, es decir, a la autoridad municipal.

En atención a lo razonado, así como al criterio obligatorio del Tribunal Pleno, se concluye que no es constitucionalmente admisible que la Legislatura de Morelos sea la que decida la procedencia del otorgamiento de la pensión por jubilación afectando el presupuesto municipal, para que en él se incorpore una partida dirigida al pago de un fin específico no contemplado al comenzar el ejercicio fiscal correspondiente.

No obsta a lo anterior, el argumento de las autoridades demandadas relativo a que el Municipio tiene la obligación constitucional de cubrir las pensiones de seguridad social que correspondan a sus trabajadores, por lo que éstas deben estar fijadas en las partidas respectivas en sus presupuestos de egresos, lo cual constituye un límite válido a la libre administración de su hacienda.

Lo anterior, en virtud de que, si bien el Municipio actor tiene la obligación constitucional de cubrir las prestaciones de seguridad social a sus trabajadores, el Congreso del Estado de Morelos unilateralmente fija el monto de éstas, sin darle intervención alguna en el procedimiento, de tal suerte que determina el destino de una parte del presupuesto de la municipalidad.

En mérito de las anteriores consideraciones, debe declararse la invalidez del Decreto Número 1474, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el nueve de julio de dos mil catorce, mediante el que se concedió pensión por cesantía en edad avanzada al trabajador Rogelio Sánchez Gatica, con cargo al gasto público del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, al ser violatorio del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la inteligencia de que se dejan a salvo los derechos de dicha persona para reclamar el pago de la pensión ante la autoridad y en la vía que corresponda.

Conforme a lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una exhortación tanto al Congreso Local como al Municipio actor para que, en el marco de sus competencias y a la brevedad, determinen el pago de la pensión correspondiente en este caso.

Cabe destacar, que no pasa desapercibido para esta Sala, que el veintidós de enero de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el Decreto Número Mil Ochocientos Setenta y Cuatro, por el que se reformó la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, de donde se advierte que el Congreso del Estado ha empezado a modificar parte del sistema de pensiones local; sin embargo, en el decreto analizado en la presente controversia, no se aplican dichas reformas, por lo que los precedentes citados del Tribunal Pleno resultan completamente aplicables.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional, respecto del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en términos del considerando tercero de esta ejecutoria.

TERCERO.—Se declara la invalidez del Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, el día nueve de julio de dos mil catorce, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

CUARTO.—Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", del Estado de Morelos, y en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI LOS ACTOS IMPUGNADOS CONSTITUYEN ACTOS FUTUROS E INCIERTOS CUYA EXISTENCIA NO SE ACREDITA EN AUTOS, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

DERECHO DE VETO. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ESTÁ FACULTADO PARA EJERCERLO RESPECTO DEL DECRETO 490 DE LA VIGÉSIMA LEGISLATURA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL MUNICIPIO LIBRE DE SAN QUINTÍN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, Y 163 Y 164 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO ESTATAL.

DERECHO DE VETO. LA FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL DECRETO 490 DE LA VIGÉSIMA LEGISLATURA LOCAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL MUNICIPIO LIBRE DE SAN QUINTÍN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 98/2013. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 25 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de febrero de dos mil quince.

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO.—**Presentación de la demanda, autoridad demandada y acto impugnado.** Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ********** y **********, quienes se

ostentaron con el carácter de presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Vigésima Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, promovieron controversia constitucional en la que demandaron del Poder Ejecutivo de la misma entidad, la invalidez de los siguientes actos:

a) El control e intervención en la esfera del Poder Legislativo del Estado de Baja California, por medio del ejercicio del veto de bolsillo al Decreto 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, en el Estado de Baja California.

b) La omisión y cumplimiento a la publicación del Decreto 490 y su indebida sanción.

c) Las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas del veto de bolsillo, omisión o incumplimiento en la publicación del Decreto 490.

SEGUNDO.—**Antecedentes.** La parte actora narra, en síntesis, los siguientes:

1. El veintiséis de junio de dos mil trece, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California dictaminó que era procedente la creación del Municipio de San Quintín, al cumplirse con los requisitos establecidos en los artículos 76 de la Constitución Local y 27 de la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, por lo que se procedió a someter a consideración y aprobación del Pleno del Congreso el dictamen correspondiente, identificado con el número 206.

2. El veintiocho de junio de dos mil trece se celebró sesión ordinaria de la Vigésima Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, en la que se discutió, votó y aprobó (con veintitrés votos a favor de los veinticinco diputados integrantes del Congreso Local) el dictamen número 206, el cual dio origen al Decreto 490, mediante el cual se constituye el Municipio de San Quintín, en el Estado de Baja California.

3. El cinco de julio de dos mil trece, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California acusó de recibido el oficio número 002115, de veintiocho de julio de dos mil trece, mediante el cual se solicitó la publicación del Decreto 490 en el Periódico Oficial de la entidad.

4. El diecinueve de julio de dos mil trece, el Congreso Local recibió un oficio de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, mediante el cual **el titular**

del Poder Ejecutivo informó que no publicaría el Decreto Número 490, y emitió una serie de observaciones, mediante las cuales justifica su negativa, omisión o incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Constitución Local.

TERCERO.—**Conceptos de invalidez.** El Poder Legislativo actor hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

1. El control e intervención por parte del gobernador de la entidad por medio del ejercicio del veto de bolsillo o de las observaciones al Decreto Número 490 violan los principios de no intervención y división de poderes establecidos en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 11 y 12, en relación con los artículos 27, fracción XXVI y 76 de la Constitución Local, 26 y 27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y 1, 13, fracción III y párrafo último, y 15, párrafo primero, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.

Los artículos 33 y 34 de la Constitución Local establecen la facultad del gobernador para vetar o promulgar única y exclusivamente las iniciativas de ley o cualquier ordenamiento legal, pero no cuando se trata de la creación de un Municipio, pues se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

La Constitución Local contempla expresamente aquellos casos en que debe existir la colaboración o coordinación de los poderes públicos en determinados actos, a fin de lograr un equilibrio de poder; sin embargo, el principio de división de poderes también implica la existencia de actos que, por su propia naturaleza, no pueden ser objeto de intervención por parte de otro Poder y, por tanto, el ejercicio del derecho de veto no es ilimitado, sino que existen actos que no pueden ser objeto de ese control.

El principio de no intervención de un Poder en otro, tratándose de actos de determinada naturaleza, deriva de diversas disposiciones de la Constitución Local, en las que expresamente no se permite o no se prevé el derecho de veto, en atención a la naturaleza de los actos de que se trate, como son las facultades del órgano legislativo para crear o suprimir Municipios; fijar, delimitar y modificar la extensión de sus territorios; autorizar mediante decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los Municipios, así como dirimir de manera definitiva las controversias o diferencias que se susciten sobre límites territoriales intermunicipales, modificando, en su caso, el estatuto territorial.

Así, para examinar si, en el caso, el gobernador puede formular observaciones a un decreto relacionado con la creación o supresión de Municipios, debe atenderse a los artículos 27 y 76 de la Constitución Local, 26 y 27 de la Ley del Régimen Municipal para la entidad, y a los artículos 1, 13, fracción III y último párrafo, y 15, párrafo primero, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, de los que se desprende que el Congreso Local tiene las facultades de crear o suprimir Municipios en el Estado de Baja California; de llevar a cabo el procedimiento de creación de Municipios, así como el plebiscito para su creación; de fijar los límites territoriales de los Municipios; de resolver las controversias que se susciten respecto de los límites territoriales entre dos o más Municipios, y que su resolución en materia de límites territoriales es definitiva e inatacable.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 15/2003, señaló que el acto de creación de un Municipio dentro de un Estado es muy parecido a los actos en que la Federación admite nuevos Estados o forma un nuevo Estado dentro de los existentes, a que se refieren las fracciones I y III del artículo 73 de la Constitución General, y que la naturaleza jurídica de tales actos es de un acto administrativo y no de una ley. De dicha controversia constitucional derivó la tesis P./J. 102/2004, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO POR EL QUE UNA LEGISLATURA ESTATAL CREA UN MUNICIPIO ES UN ACTO CONDICIÓN POR LO QUE EL PLAZO PARA IMPUGNARLO SE RIGE POR LAS REGLAS RELATIVAS A LOS ACTOS EN SENTIDO ESTRICTO."

Así, aunque la Constitución Local establece el derecho de veto a cargo del Poder Ejecutivo de la entidad, tratándose de la creación de un Municipio, no es posible que dicho Poder ejerza tal facultad, pues se vulneraría la independencia del Poder Legislativo Local, pues se obstaculiza la función exclusiva conferida a éste, consistente en la creación de un nuevo Municipio en el Estado.

Es decir, el hecho de que la Constitución Local prevea dentro del procedimiento que da origen a una ley o decreto la intervención del Poder Ejecutivo, no se traduce en que esto deba darse en todos los casos, sino que debe estarse a la naturaleza de la facultad mediante la cual se expidió el decreto en cuestión, por lo que, tratándose de atribuciones propias del órgano legislativo, como son las determinaciones concernientes a la creación o supresión de un Municipio, no procede ejercer el derecho de veto.

De lo contrario se obstaculizaría la facultad en cuestión, máxime que se trata de la creación de un Municipio, cuya constitución es primordial para

los habitantes de esa región, pues una de las características de los Municipios es la cercanía que debe existir entre autoridades y población, lo que en el presente caso no sucede, debido a que la cabecera municipal que se encuentra en el Municipio de Ensenada está ubicada a una distancia aproximada de doscientos kilómetros de San Quintín, sin mencionar la lejanía de los poblados que se encuentran en la parte sur del Estado de Baja California, como son Jesús María o Isla Cedros.

Además, la creación del Municipio reduciría la desigualdad en las condiciones de vida de quienes habitan en esa región del Municipio de Ensenada, dado que se constituirá su propia hacienda municipal para la aplicación de los servicios públicos que establece el numeral 115, fracción III, de la Constitución General.

Asimismo, se menciona que el Municipio es el segundo grado de las sociedades fundamentales que abarca todos los aspectos de la personalidad humana y no es una mera circunscripción territorial para un objeto político, sino una comunidad de familias para la prosecución de los fines esenciales de la vida, una comunidad para el fin civil y político, religioso, económico, industrial, de agricultura, del comercio, del consumo, del intelectual y de la instrucción, por lo que es importante la creación del Municipio de San Quintín.

Por tanto, si el Decreto 490 se relaciona con la creación de un Municipio, es decir, con una facultad del Congreso de la entidad, el Poder Ejecutivo Local no tiene facultad alguna para intervenir, ni mucho menos para vetar las actuaciones que el Congreso Local realice al respecto, además de que se trata de un acto administrativo y no de una ley.

La circunstancia de que el titular del Poder Ejecutivo haya estimado que el Congreso Local incurrió en violaciones procedimentales, al emitir el Decreto 490, por no haberse alcanzado el porcentaje del plebiscito para la constitución del Municipio de San Quintín o que los límites del nuevo territorio no son los correctos, no lo autoriza a desecharlo o negarse a publicarlo, pues opera el principio de no intervención, sin que exista alguna excepción al respecto en la Norma Fundamental que lo faculte para intervenir en las determinaciones relativas a creación o supresión de Municipios.

Por ello, la obligación del Ejecutivo Local era la de publicar el decreto y, en caso de no estar de acuerdo con la actuación de la Legislatura, promover los medios de control constitucional correspondientes.

En conclusión, el acto de observaciones o de veto y el acto de no sancionar y publicar el Decreto Número 490 transgreden el principio de no intervención de un Poder en otro, tratándose de actos de determinada naturaleza y, en consecuencia, el de división de poderes establecido en el artículo 116 constitucional.

2. La omisión o incumplimiento de publicar el Decreto Número 490 viola los artículos 14, segundo párrafo, 16, párrafo primero y 116 de la Constitución General, así como los artículos 11, 12, 27, fracción XXVI, 33, 49, fracción I y 76 de la Constitución Política del Estado de Baja California.

Los artículos 11, 12, 27, fracción XXVI y 76 de la Constitución Local regulan lo relativo a la independencia del Poder Legislativo, las facultades del Congreso del Estado, las funciones del mismo respecto de la creación o supresión de Municipios en la entidad, las formalidades del procedimiento de creación de Municipios y el carácter de definitivas e inatacables que adquieren las resoluciones del Congreso Local en materia de municipalización.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 31/97, interpuesta por el Ayuntamiento de Temixco, Morelos, señaló que el orden jurídico constitucional, en su aspecto orgánico, establece el sistema de competencias al que deberán ceñirse la Federación, las entidades federativas, los Municipios y el Distrito Federal, y que el orden constitucional tiende a preservar la regularidad del ejercicio de las atribuciones establecidas en favor de las autoridades, las que nunca deberían rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución General.

Bajo esa premisa, se estableció que si bien las autoridades deben acatar los principios rectores que prevé la Constitución y, en esa medida, aun cuando se trate de un acto de colaboración entre Poderes, se debe respetar el principio de legalidad y, en consecuencia, el de debida fundamentación y motivación, es claro que este mandato se debe cumplir de manera diversa a la forma en que se cumple, tratándose de actos que trascienden el ámbito autoritario e inciden en la esfera jurídica de los particulares.

Asimismo, la Corte ha establecido que, tratándose de actos de autoridad que no trascienden en la esfera de particulares y que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, la garantía de legalidad tiene por objeto simple y sencillamente que se respete el propio orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponde a una autoridad. Al respecto, se cita la tesis P./J. 50/2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUM-

PLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, EN LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES."

En el caso, no existe norma legal alguna que faculte al gobernador de la entidad a que omita, incumpla o niegue la publicación del Decreto 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, en el Estado de Baja California, máxime que el acto de creación de un Municipio no es una ley, sino que debe ser calificado como un acto administrativo.

Entonces, al considerarse como acto administrativo el evento de creación de un Municipio, el gobernador de la entidad no podía negarse a publicar el Decreto Número 490, bajo la justificante de haber ejercido las observaciones o el derecho de veto, pues aunque siguió todas las fases del proceso legislativo, esto no significa que pueda considerarse una ley.

Considerar que el Ejecutivo Local puede vetar el decreto de creación de un Municipio vulneraría la independencia del Poder Legislativo Local, por tratarse de una facultad propia, además de que obstaculizaría una función conferida exclusivamente a dicho órgano legislativo.

Por otra parte, se considera que la palabra "decreto" tiene varias acepciones. En su significado amplio se define como resolución, determinación o decisión. Bajo esta noción podrían incluirse a la ley y a la sentencia, pues ambas entrañan una resolución, orden o decisión; sin embargo, en su acepción estricta, el decreto es un acto que implica una resolución, orden o decisión para un caso concreto, particular o personal, lo cual excluye a los atributos materiales de generalidad, abstracción e impersonalidad de la ley.

El Decreto Número 490 que crea al Municipio de San Quintín es un acto en sentido estricto o norma jurídica individualizada, porque tiene un destinatario determinado (la nueva entidad política que se crea e integra a la geografía estatal), y que carece de los atributos materiales de generalidad, abstracción e impersonalidad que conlleva la ley. El Decreto Número 490 se aplica a un caso concreto y se refiere a una situación particular, a saber, la creación del Municipio de San Quintín, pues una vez constituido éste, no volverá a aplicarse el decreto.

Por tal motivo, se estima que en el presente caso no se cumple la garantía de fundamentación, pues no existe disposición legal alguna que faculte al gobernador del Estado de Baja California a omitir, incumplir o negar la publicación del decreto impugnado, cuyo objeto es la creación o constitución

del Municipio de San Quintín en esa entidad federativa, además de que las observaciones o el veto de bolsillo por parte del gobernador de la entidad no pueden aplicarse a actos administrativos, como es el de la constitución de un Municipio.

Por otra parte, tampoco se cumple la garantía de motivación, en razón de que no existen normas que den competencia al gobernador para actuar en el sentido en que lo hizo, pues la garantía de motivación exige que se den los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de esa competencia. Además, no se advierte la existencia de la hipótesis fáctica necesaria para ejercer el derecho de veto por parte del titular del Ejecutivo Estatal, en el proceso de creación del Municipio de San Quintín, pues ello se constata con las pruebas aportadas mediante las cuales se observa que el Congreso Local ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos establecidos por los artículos 76 de la Constitución Local, 26 y 17 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, y 1, 13, fracción III y párrafo último y 15, párrafo primero, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.

Al respecto, el Poder Legislativo actor señala una serie de acontecimientos que, en síntesis, son los siguientes:

- El dieciséis de noviembre de dos mil diez se aprobó por el Pleno del Congreso la proposición con punto de acuerdo en el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento a la Solicitud de Municipalización de San Quintín –integrada el veintidós de junio de dos mil once–, misma que fue turnada a la Junta de Coordinación Política con opinión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, mediante oficio número 3784.

- El veintinueve de diciembre de dos mil once se aprobó el dictamen número 99 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XX Legislatura del Estado, en el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, para la realización del plebiscito ciudadano en la región de San Quintín, Baja California, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial 61, número especial, página número treinta y ocho.

- El catorce de agosto de dos mil doce se aprobó el acuerdo mediante el cual la Legislatura determinó llevar a cabo un plebiscito a los ciudadanos residentes en el Municipio de Ensenada, Baja California, a efecto de conocer

su aprobación o rechazo para la creación del Municipio de San Quintín. El veintidós del mismo mes se celebró el Convenio General de Colaboración para la Realización del Plebiscito para la Municipalización de San Quintín, Baja California, entre la Vigésima Legislatura de la entidad y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Estatal, del que se desprende que corresponde a este último llevar a cabo el programa operativo para la planeación, preparación y realización del plebiscito para la municipalización de San Quintín, Baja California, de acuerdo con la cláusula décima del citado instrumento.

- El veintidós de agosto de dos mil doce, la presidencia del Congreso Local, mediante oficio número 003338, dirigido al gobernador de la entidad, remitió la convocatoria dirigida a los ciudadanos residentes del Municipio de Ensenada, Baja California, para participar en el plebiscito referido. El veinticuatro de agosto siguiente dicha convocatoria fue publicada en el Periódico Oficial de la entidad.

- El cuatro de septiembre del mismo año, la Comisión Especial para el Seguimiento de la Solicitud de Municipalización celebró sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y/o aprobar el proyecto de dictamen número 15, relativo a la solicitud de modificación presupuestal, consistente en la ampliación presupuestal conforme al fondo autorizado para este efecto por parte del Congreso Local, en su dictamen número 99, de veintinueve de diciembre de dos mil once.

- El diecisiete de octubre de dos mil doce se dirigieron diversos oficios al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Ensenada, al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Ensenada, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, al presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Ensenada, al presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada y a diversos diputados por parte del coordinador de Enlace del Congreso del Estado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, con motivo del envío de ejemplares de encarte en donde se encontraba la información preliminar de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla para la jornada de consulta del veintiocho de octubre de dos mil doce.

- El dieciocho de octubre de dos mil doce se llevó a cabo la reunión de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Solicitud de Municipalización de San Quintín del Congreso Local.

- El veinte de octubre de dos mil doce se entregó al coordinador de la zona cajas con material electoral en su interior.

- El veintiocho de octubre de dos mil doce se llevó a cabo el plebiscito para la municipalización de San Quintín y, al día siguiente, se inició el cómputo de la jornada de consulta en la sede de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Solicitud de Municipalización de San Quintín (con 17,580 votos a favor de la municipalización, 7,547 en contra de la municipalización y 224 votos nulos de un total de 25,351).

- El treinta de octubre de dos mil doce se reunió la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, en su calidad de presidenta de la comisión referida, a efecto de entregar los listados nominales de electores con fotografía, correspondientes al Municipio de Ensenada, Baja California.

- El seis de noviembre de dos mil doce, la presidenta de la comisión referida presentó ante el Pleno del Congreso Local el informe de resultados del plebiscito para consultar a los ciudadanos residentes del Municipio de Ensenada, Baja California, sobre la solicitud de municipalización de San Quintín, mismo que fue turnado a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la Junta de Coordinación Política, mediante oficios números 004411 y 004412, y recibido en la presidencia de la mesa directiva y de acuerdo con la facultad conferida en el artículo 50, fracción II, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California fue turnado a la comisión mencionada y a la Junta de Coordinación Política para su estudio, análisis, opinión y dictaminación.

- El veintisiete de noviembre siguiente, el presidente del Congreso Local remitió a la presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal el escrito mediante el cual el presidente del Comité Pro-Defensa Municipalización de San Quintín, solicita, de nueva cuenta, informe sobre el plebiscito para la municipalización de la región de San Quintín, desarrollado el veintiocho de octubre de dos mil doce.

- La Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso, mediante oficio de treinta de enero de dos mil trece, remitió a la Dirección General de Servicios Parlamentarios del mismo, el informe en comento para su estudio y análisis.

- El catorce de mayo de dos mil trece el presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales remitió al Ayuntamiento

de Ensenada, Baja California, el oficio no. JBMT/591/2013, con la petición expresa de que dicho órgano colegiado rindiera opinión fundada, respecto a la conveniencia o no de la pretensión de la municipalización de la región de San Quintín, Baja California, concediéndole para ello un término de treinta días hábiles.

- El veintiuno de julio de dos mil trece se recibió por esa comisión el oficio número PM/565/2013, signado por el presidente municipal de Ensenada, por medio del cual expresa la improcedencia de la petición realizada.

- El veintiséis de junio de ese mismo año, la comisión turnó oficio solicitando a la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Poder Legislativo Local, rendir opinión jurídica sobre la omisión por parte del Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción IV, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, en relación con la opinión sobre la conveniencia o no de la creación de un nuevo Municipio en la región de San Quintín, Baja California.

- El Congreso Local celebró sesión ordinaria, donde se discutió, votó y aprobó el dictamen número 206, emitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mismo que dio origen al Decreto Número 490, mediante el cual, se constituye el Municipio de San Quintín, Baja California.

Lo anterior permite concluir que existieron los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho previos a la decisión final del Congreso Local de Baja California, lo que conduce a afirmar que sí procedía aprobar la creación del Municipio de San Quintín, y que es injustificada la conducta llevada a cabo por el gobernador, al omitir, negar o incumplir con la publicación del Decreto Número 490, mediante el que se creó el citado Municipio.

En consecuencia, al no haber actuado conforme a las disposiciones legales aplicables para la creación de un Municipio, el gobernador de la entidad no cumple con las garantías de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad, por lo que se viola la garantía de legalidad que tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera competencial de una autoridad, por lo que se debe estimar que la omisión de publicar el Decreto Número 490 es violatoria de los artículos 14, 16 y 116, fracción II, de la Constitución General de la República, al implicar un exceso en sus facultades y una obvia y evidente transgresión de competencias por parte del Ejecutivo Local.

CUARTO.—**Artículos constitucionales que el actor aduce violados.** Los preceptos constitucionales que se indicaron como vulnerados son los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución General de la República.

QUINTO.—**Admisión y trámite.** Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 98/2013, y determinó turnarla conforme a la certificación correspondiente, en la que se indicó que la instrucción del procedimiento correspondía al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil trece, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al que mandó emplazar para que formulara su contestación y para que enviara copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados. También ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.—**Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.** En el escrito respectivo, sustancialmente, señaló:

El **primer concepto de invalidez**, en el que se indica que el gobernador de la entidad carece de facultades para vetar la creación de un Municipio y que, en consecuencia, las observaciones que realizó al Decreto Número 490 transgreden el principio de no intervención, resulta infundado, por lo siguiente:

El artículo 116 constitucional establece la organización política y administrativa de los Estados, así como su respectivo marco jurídico de actuación. Asimismo, de dicho precepto se advierte que es imperativo para los Estados darse su Constitución y establecer en ella la división de poderes, su organización, reglas y principios básicos correspondientes, con apego a la Constitución General.

Las Constituciones Estatales tienen la pretensión de permanencia o duración, que proporciona seguridad y estabilidad jurídica, política y social en su ámbito de aplicación, lo que hace patente la trascendencia de que estén claramente previstas, entre otras, las normas fundamentales concernientes a la estructura y forma de gobierno, así como la integración y atribuciones de los Poderes y, a su vez, que tales normas sean estrictamente aplicadas por las autoridades competentes para ello.

La Constitución Local establece claramente las normas que rigen las distintas etapas del trabajo legislativo para la formación de leyes y decretos en el Estado, así como las que regulan las facultades atribuidas a cada entidad partícipe en dicho proceso legislativo, disposiciones que, además, se encuentran inmersas en la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo Local y en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.

De las disposiciones que regulan el proceso legislativo es posible advertir que es un acto complejo en el que intervienen diversos órganos constitucionales, como son el Legislativo, que los expide, y el Ejecutivo, que los promulga y publica. La actuación de ambos da validez a las leyes o decretos.

La facultad del Ejecutivo Local de hacer observaciones a los proyectos de ley o decretos aprobados por el Congreso Local representa un mecanismo de control político de Poderes, cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una limitación del poder por el poder mismo, representando su ejercicio el principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar el exceso en el ejercicio de las funciones del Poder Legislativo. Por ello, dicha facultad debe ser respetada por el Poder Legislativo Local, ya que, de lo contrario, se rompería el equilibrio de Poderes y, en consecuencia, el orden constitucional.

El derecho de veto, conforme a los apartados G y H del artículo 34 de la Constitución Local, únicamente es improcedente tratándose de: a) decretos que manden abrir o cerrar sesiones, b) los emitidos actuando en funciones de Jurado de Sentencia, c) tratándose de reformas constitucionales aprobadas en términos del artículo 112 de la Constitución Local y d) tratándose de la ley que regula la estructura y funcionamiento interno del Poder Legislativo Local y sus reformas.

De ello se desprende que la facultad de veto no se limita a los cuerpos normativos que apruebe el Congreso Local, sino a todo el trabajo que resulte del proceso parlamentario, lo que se confirma de la lectura de las excepciones a la facultad de veto establecidas en el artículo 34 de la Constitución Local, que se refiere también a diversos actos propios del ejercicio del Congreso Local.

Es decir, todas las leyes y decretos, inclusive los que no se refieren a cuerpos normativos, pueden ser vetados por el gobernador local, con las únicas excepciones que en dicho cuerpo normativo se establecen. Además, el legislador optó por enumerar únicamente determinados supuestos de decre-

tos, lo que implica que todo el trabajo parlamentario que no está expresamente previsto como excepción al veto y que deriva de los trámites legislativos que contempla el artículo 29, es susceptible de ser vetado por el Ejecutivo Local.

En ese contexto, el gobernador del Estado actuó en estricto apego a derecho, al realizar las observaciones al Decreto Número 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, Baja California, y en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 34 de la Constitución Local, el que no contempla como supuesto de excepción los decretos mediante los cuales se crean Municipios, por lo que son parte del trabajo parlamentario susceptible de ser vetado por el Poder Ejecutivo de Baja California.

Por tanto, la facultad de veto no constituye una transgresión al principio de no intervención de los Poderes, toda vez que dicha facultad atiende a la colaboración que debe existir entre los Poderes a efecto de mantener el equilibrio entre los mismos, sin que ello se traduzca en una invasión al Poder Legislativo Local, pues frente al veto de dicho Poder; de igual forma, posee la facultad de superarlo, lo que evidencia el sistema de pesos y contrapesos necesario en todo sistema democrático.

De ahí que las observaciones que realizó el Ejecutivo Local al Decreto Número 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, no transgreden el principio de no intervención a que alude la parte actora, pues conforme a la legislación local, los decretos de creación de Municipios son susceptibles de ser vetados y porque la facultad de veto en forma alguna constituye una invasión a la esfera de competencias del Poder Legislativo de Baja California, pues dicho Poder tiene la facultad de superar el veto mediante el procedimiento establecido en la Constitución Local.

Sobre todo, tomando en cuenta que el contenido del oficio de diecisiete de julio de dos mil trece, mediante el cual el gobernador de la entidad realizó observaciones al Decreto Número 490, puntualiza cuestiones de orden público y de interés social, como son la necesidad de que en la creación de un Municipio se satisfagan los requisitos previstos en la Constitución Local, así como lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado, en relación con la Ley de Participación Ciudadana del Estado, respecto del requisito relativo al porcentaje mínimo de participación ciudadana que debe obtenerse en el plebiscito llevado a cabo al efecto, mismo que no se satisfizo en el presente caso. Asimismo, también se advirtieron irregularidades respecto a la delimitación del territorio de que se trata, lo que el Ejecutivo Local sustenta con dos órganos colegiados expertos en la materia de topografía.

En la controversia constitucional 52/2004, la Suprema Corte estableció que la transgresión al principio de no intervención de un Poder y, en consecuencia, el de división de poderes, en el caso específico de derecho de veto, se actualiza cuando éste se realiza respecto de aspectos internos del órgano legislativo, lo que en el caso no acontece.

El **segundo concepto de invalidez** que se refiere a que el Poder Ejecutivo Local viola el Decreto Número 490 por contravenir el artículo 76 de la Constitución Local –que establece que las resoluciones del Congreso Local son definitivas e inatacables– es infundado, pues el Decreto Número 490 constituye un decreto mediante el cual se crea un Municipio y no una resolución a las que se refiere el artículo mencionado.

El precepto en comento de la Constitución Local se refiere a las resoluciones que diriman los acuerdos que respecto a los límites territoriales surjan entre los Municipios, pues de la integridad del artículo 76 no se desprende que se haga alusión de forma expresa a otro tipo de resoluciones del Congreso Local, pues en relación con las actuaciones de dicho órgano, el numeral en comento únicamente se refiere a la aprobación de los convenios amistosos que hagan los Municipios en relación con los límites territoriales y a la resolución que, en su caso, emita cuando una de las partes se encuentre inconforme con la delimitación territorial de un Municipio.

Asimismo, la fracción XXVI del artículo 27 de la Constitución Local, a la que alude el artículo 76 referido, establece tres facultades del Congreso Local: (1) crear y suprimir Municipios; (2) fijar, delimitar y modificar sus territorios; y, (3) dirimir de manera definitiva las controversias o diferencias que se susciten sobre límites territoriales intermunicipales, modificando, en su caso, el estatuto territorial. De dichas facultades, sólo en la última se hace alusión a una resolución que de forma definitiva emite el Congreso, lo que robustece la idea de que el artículo 76 de la Constitución Local, al establecer que las resoluciones del Congreso Local son definitivas e inatacables, son precisamente las que dirimen controversias de límites territoriales.

Por ello, resulta inoperante el argumento que esgrime la actora, toda vez que el Decreto Número 490, por el que se crea el Municipio de San Quintín, no constituye una resolución mediante la cual el Congreso Local haya dirimido un conflicto entre Municipios respecto a límites territoriales, por ende, el decreto en mención no encuadra en el supuesto al que se refiere el artículo 76 de la Constitución Local, respecto a las resoluciones definitivas e inatacables.

Además, conforme a lo previsto en la Constitución Local, el decreto por el que se crea un Municipio no es definitivo, habida cuenta que, conforme a lo expuesto y transcrito en párrafos anteriores, el trabajo parlamentario del que deriva dicho decreto no concluye con la aprobación del mismo por parte del Congreso Local, sino con la publicación del decreto de referencia en el Periódico Oficial de Baja California, por parte del Poder Ejecutivo del Estado, momento en el que se adquiere la calidad de definitivo, lo que corrobora que el decreto, cuya invalidez se impugna, no encuadra en la parte relativa del artículo 76 referido.

El veto ejercido por el Ejecutivo Local en forma alguna contraviene el artículo 76 de la Constitución Estatal, pues las observaciones no tienen por objeto atacar la resolución del Congreso ni revertirla; asimismo, el veto no tiene el alcance de sustraer el carácter definitivo a la resolución que, respecto a la creación de un Municipio, emita el Congreso Local, pues como ya se expuso en párrafos precedentes, la decisión radica en la esfera de competencias del Poder Legislativo de Baja California, que tiene la facultad de tomar en cuenta o no las observaciones realizadas a dicho decreto.

Resultan aplicables las tesis de rubros: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL. LAS RESOLUCIONES QUE PRONUNCIE EN CONFLICTOS LABORALES QUE SE SUSCITEN ENTRE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS SERVIDORES, SI BIEN SON DEFINITIVAS E INATACABLES EN LA VÍA ORDINARIA, PUEDEN SER COMBATIDAS POR MEDIO DEL JUICIO DE AMPARO." y "DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE LIMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL CONTENIDO, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE LEY O DECRETO."

En tal contexto, resultan infundados los dos conceptos de invalidez planteados, ya que el gobernador de la entidad, al emitir las observaciones respecto del Decreto Número 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, Estado de Baja California, actuó en estricto apego a la normatividad vigente en el Estado y a los principios constitucionales que imperan en nuestro sistema jurídico mexicano.

SÉPTIMO.—**Opinión del procurador general de la República.** El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

OCTAVO.—**Cierre de la instrucción.** Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Regla-

mentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO.—**Radicación.** Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Baja California, en la que no se combaten normas de carácter general.

SEGUNDO.—**Precisión de los actos impugnados.** En su escrito inicial de demanda, el Poder Legislativo actor señala como actos impugnados los siguientes:

"a) El control e intervención inconstitucional en la esfera del Poder Legislativo del Estado de Baja California, **por medio del ejercicio del veto de bolsillo** al Decreto Número 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, en el Estado de Baja California; violentando, con ello, el principio de no intervención y, por ende, al principio de división de poderes consagrado en el numeral 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 11 y 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en relación con los artículos 27, fracción XXVI y 76 del mismo ordenamiento constitucional citado.

"b) La **omisión o incumplimiento a la publicación del Decreto Número 490 y la indebida sanción a dicho decreto**, mediante la cual se constituye el Municipio de San Quintín, aprobado por la mayoría calificada de los diputados integrantes del Pleno del Congreso del Estado de Baja California, en la sesión ordinaria de fecha veintiocho de junio del año dos mil trece, no obstante la debida solicitud formulada por este Congreso del Estado de Baja California, vía oficio número 002115, con fecha de acuse de recibido de cinco de julio del año dos mil trece, para la conducente publicación de dicho decre-

to, en el Periódico Oficial del Estado, violentando con ello, la garantía de legalidad, en lo que respecta a la fundamentación y motivación, prevista en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación con el 116 del mismo ordenamiento constitucional, lo que se traduce en una intervención y control inconstitucional por parte del titular del Ejecutivo hacia este Congreso del Estado de Baja California.

"c) Las consecuencias de hecho y de derecho, mediatas e inmediatas del veto de bolsillo, omisión o incumplimiento en la publicación del Decreto 490, aprobado por la mayoría calificada (23 votos a favor de los 25 representantes populares que conforman este Poder Legislativo) de los diputados integrantes del Pleno del Congreso del Estado de Baja California, en la sesión ordinaria de fecha veintiocho de junio del año dos mil trece, no obstante la legítima y fundada solicitud formulada por este Congreso del Estado de Baja California vía oficio número 002115, con fecha de acuse de recibido de cinco de julio del año dos mil trece, para la debida publicación de dicho decreto, en el Periódico Oficial del Estado."

Por lo que se refiere a los actos identificados con los incisos a) y b), esta Sala advierte que el acto que, en principio, se atribuye al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California consiste en la omisión de publicar un decreto del Poder Legislativo, a través del ejercicio del denominado "veto de bolsillo", como se conoce a la práctica de impedir la culminación del proceso legislativo a través de la omisión deliberada de publicar un decreto. Sin embargo, del estudio integral de la demanda se advierte que los argumentos de la parte actora en realidad están dirigidos a combatir **el ejercicio del veto por el Poder Ejecutivo Local al Decreto Número 490, a través del cual, el Congreso Local creó el Municipio de San Quintín**, bajo el argumento de que en el caso era improcedente el ejercicio del veto.

En este sentido, lo relativo al "control e intervención inconstitucional en la esfera del Poder Legislativo del Estado de Baja California" constituye más bien un argumento en contra de la emisión de las observaciones y no de un acto impugnado en sí mismo, por lo que el único acto que debe tenerse como impugnado en los incisos a) y b) es precisamente la formulación de observaciones al Decreto 490 de la Vigésima Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual se crea el Municipio Libre de San Quintín.

La existencia de dicho acto se acredita mediante la copia certificada del oficio sin número de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, mediante el cual

el gobernador del Estado de Baja California formuló observaciones al Decreto Número 490 mencionado.[1]

Por lo que se refiere a los actos identificados en el inciso c), esta Sala advierte que las consecuencias del acto impugnado constituyen actos futuros e inciertos, cuya existencia no se acredita en autos, por lo que procede el sobreseimiento con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—**Oportunidad.** La presente controversia se hace valer en contra de un acto del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, consistente en las observaciones a un decreto de creación de un Municipio, por lo que para el cómputo de la oportunidad debe estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual, cuando se impugnan actos en la controversia constitucional, el actor cuenta con un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que: a) surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) se ostente sabedor de los mismos.

De las constancias de autos se desprende que la parte actora tuvo conocimiento del oficio impugnado el diecinueve de julio de dos mil trece, según consta en la copia certificada del propio documento, en la que aparece un sello de recibido de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Baja California en esa fecha.[2]

Por tanto, el plazo de treinta días para la promoción de la demanda transcurrió del primero de agosto al once de septiembre de dos mil trece, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de agosto; primero, siete y ocho de septiembre, todos ellos por ser sábados y domingos y, por tanto, inhábiles; así como los días dieciséis a treinta y uno de julio por corresponder al periodo de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo establecido por los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el

[1] Fojas 67 a 78 del expediente de la controversia constitucional.
[2] Foja 67 del expediente.

Acuerdo General Número 18/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles y de descanso.

Por tanto, al haberse recibido la demanda el cuatro de septiembre de dos mil trece, debe concluirse que su presentación fue oportuna.

CUARTO.—**Legitimación activa.** De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,[3] el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por ********** y **********, en su carácter de presidente y secretario de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California, respectivamente; cargos que acreditaron con copia certificada del acta de la sesión previa de la Legislatura del Estado de Baja California, de treinta y uno de mayo de dos mil trece, en la que se llevó a cabo la elección de los integrantes de la mesa directiva, de la que se advierte que dichos funcionarios fueron electos en los cargos que ostentan para el periodo comprendido entre el primero de junio y el treinta de septiembre de dos mil trece.[4]

Conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,[5] la representación legal del Congreso Estatal ante toda autoridad recae en el presidente y en el secretario de la mesa directiva; por lo anterior, se concluye que los promoventes se encuentran debidamente legitimados para promover la presente controversia constitucional, además de que el Poder Legislativo es de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General.

QUINTO.—**Legitimación pasiva.** Por la parte demandada, compareció Francisco Antonio García Burgos, ostentándose como secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, sin que acompañe a su escrito de

---

[3] "**Artículo 11.** El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

[4] Fojas 43 a 53 del expediente.

[5] "**Artículo 38.** Al órgano de dirección, denominado mesa directiva, le corresponde la conducción del Congreso, que es ejercida por su presidente y secretario quienes tendrán la representación legal del Congreso ante todo género de autoridades."

contestación documento alguno con que acredite dicha personalidad; sin embargo, de conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 43/2009,[6] aplicable a las controversias constitucionales por identidad de razón, esta Sala advierte como hecho notorio que en el expediente de la controversia constitucional 81/2013, dicho funcionario acreditó su carácter de secretario general de Gobierno del Estado de Baja California mediante la copia certificada de su nombramiento expedido por el gobernador de esa entidad con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil doce.[7]

De conformidad con el artículo 19, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,[8] corresponde a la Secretaría General de Gobierno representar legalmente al Poder Ejecutivo del Estado, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias constitucionales a que se refiere el artículo 105 de la Constitución General. Al respecto, si bien no fue exhibido el acuerdo del Ejecutivo Local para que el consejero jurídico lo representara en este asunto, debe presumirse que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, en términos del artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia.[9]

---

[6] "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.—Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 1o., resulta válida la invocación por el tribunal de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de integrantes del Tribunal en Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad que les han sido planteadas pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias dictadas en aquéllas, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al expediente, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ejercerse para resolver la contienda judicial." (Jurisprudencia P./J. 43/2009, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Pleno, Tomo XXIX, abril de 2009, página 1102)

[7] Foja 102 del expediente de la controversia constitucional 81/2013.

[8] **Artículo 19.** A la Secretaría General de Gobierno, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

…

XXIII. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[9] Resulta aplicable, por analogía, la siguiente jurisprudencia: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL LA

Finalmente, por ser la autoridad que emitió el acto impugnado y ser, además, de los entes enunciados en la fracción I, inciso h), del artículo 105 constitucional, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California cuenta con la legitimación procesal suficiente para ser parte demandada en la controversia constitucional.

SEXTO.—**Causas de improcedencia.** No se hacen valer ni de oficio se advierte la existencia de alguna.

SÉPTIMO.—**Antecedentes.** De autos se desprenden los siguientes:

1. Dictamen 206 emitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, relativo a la municipalización de San Quintín, Estado de Baja California. El veintiocho de junio de dos mil trece, el Congreso Local celebró sesión ordinaria en la que se discutió el dictamen número 206 emitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el cual dio origen al Decreto Número 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, Estado de Baja California.[10]

2. Remisión al Poder Ejecutivo de Baja California. El cinco de julio de dos mil trece, los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso Local remitieron el Decreto Número 490 al gobernador del Estado de Baja California, mediante oficio número 002115, mismo que fue recibido en la secretaría particular de la oficina del Ejecutivo el mismo día.[11]

3. Veto. El diez de julio de dos mil trece se recibió en la Oficialía de Partes del Congreso Local, el oficio mediante el cual el gobernador del Estado de Baja California formuló observaciones al Decreto Número 490.[12]

TIENE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, PARA PROMOVER EN NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.—Conforme a lo dispuesto en los artículos 11, párrafos primero y tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde al consejero jurídico del Ejecutivo Federal representar al presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las controversias constitucionales; acuerdo que en todo caso debe presumirse, salvo prueba en contrario, ya que, en términos de lo establecido en el primer dispositivo citado, quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad legal para hacerlo." (Jurisprudencia P./J. 70/97, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Pleno, Tomo VI, septiembre 1997, página 546)

[10] Fojas 8 a 228 del expediente. También es consultable en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Baja California, de 28 de junio de 2013, pp. 42-97.

[11] Foja 341 del expediente.

[12] Foja 67 del expediente.

OCTAVO.—**Estudio de fondo.** En su primer concepto de invalidez, el Poder Legislativo actor aduce que el gobernador del Estado de Baja California no estaba facultado para formular observaciones al Decreto Número 490, mediante el cual se crea el Municipio de San Quintín, Estado de Baja California, por lo que se viola el principio de división de poderes establecido en el artículo 116 constitucional y el principio de no intervención de un poder en otro, así como los artículos 11, 12, 27, fracción XXVI y 76 de la Constitución Local y 1, 13, fracción III, último párrafo y párrafo primero y artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.

Sostiene lo anterior, porque considera que si bien el Poder Ejecutivo estatal tiene la facultad de vetar, ésta se ejerce únicamente respecto de iniciativas de ley u otros ordenamientos legales y no cuando se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo, como lo es la creación de un Municipio, que además tiene la naturaleza de un acto administrativo y no de una ley.

En el segundo concepto de invalidez, el Poder actor aduce que se vulneran las garantías de fundamentación y motivación establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al no existir norma legal que faculte al gobernador de la entidad a que ejerza el veto respecto de la publicación del decreto mediante el cual se crea un Municipio y al no existir la hipótesis fáctica necesaria para que el Ejecutivo Local pudiera ejercer el derecho de veto.

Esta Sala advierte que los argumentos de la parte actora se dirigen, por un lado, a sostener que conforme a la legislación local aplicable, el derecho de veto no es procedente, tratándose de decretos de creación de Municipios y, por otro lado, a afirmar que el ejercicio del derecho de veto en supuestos como éste, viola el principio de división de poderes.

Por tanto, para dar contestación a tales planteamientos, se considera necesario determinar: 1) si en términos de la Constitución Política, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de la Ley del Régimen Municipal, todas del Estado de Baja California, la facultad de veto del gobernador se puede ejercer respecto de acuerdos del Congreso Local, relativos a la creación de Municipios en esa entidad y 2) si el ejercicio del veto respecto de este tipo de decretos viola el principio de división de poderes, por constituir una intromisión en facultades exclusivas del Poder Legislativo Local.

1. Procedencia del veto respecto de decretos de creación de Municipios en el Estado de Baja California

El veto es un mecanismo de colaboración entre Poderes, a través del cual el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de intervenir en el proceso legis-

lativo con el fin de realizar observaciones a los proyectos aprobados por los Congresos. Es una prerrogativa del órgano ejecutivo, consistente en la posibilidad de hacer llegar al órgano legislativo información, objeciones y cuestionamientos adicionales que pudieron no haberse tomado en cuenta en el momento de discutirse la iniciativa durante el procedimiento legislativo respectivo. Se trata, como lo ha dicho el Pleno, de una institución constitucional que se desprende directamente del sistema de pesos y contrapesos y que atiende a la dimensión de colaboración institucional que deriva del principio de división de poderes.

En el caso de Baja California, esta facultad para formular observaciones a leyes o decretos está prevista en el artículo 34 de su Constitución Política, en los siguientes términos:

"**Artículo 34.** Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga saber, para que tomadas en consideración, se examine y se discuta de nuevo.

"A. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.

"B. El proyecto de decreto o de ley al que se hubieren hecho observaciones, será promulgado y publicado si el Congreso en un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos tercios del número total de sus miembros. Vencido este plazo, se tendrá por no ratificado el proyecto de que se trate.

"Los proyectos de decreto o de ley que hubieren sido objetados por el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados por el Congreso en el plazo indicado en el párrafo anterior, deberán ser promulgados y publicados en un término que no exceda de cinco días, contados a partir de la fecha en que hayan sido remitidos nuevamente al Ejecutivo.

"C. Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el presidente y el secretario del Congreso,

en un plazo máximo de diez días a su aprobación. En un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta Constitución.

"Las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionadas por el Ejecutivo deberán ser promulgados y publicados en el Periódico Oficial del Estado.

"D. Si los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, no fijan el día en que deben comenzar a observarse, serán obligatorias tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

"E. Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de índole tributario o fiscal, podrán ser sometidas a referéndum, conforme lo disponga la ley.

"F. Los asuntos que sean materia de acuerdo, se sujetarán a los trámites que fije la ley.

"G. El gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso, los emitidos por éste cuando actúe en funciones de jurado de sentencia y las reformas constitucionales aprobadas en los términos del artículo 112 de esta Constitución.

"H. El Congreso del Estado tendrá facultades plenas para expedir, reformar, adicionar o abrogar la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. Esta ley o las reformas a la misma no podrán ser sujetas a observaciones, ni necesitarán de sanción, promulgación y publicación del Ejecutivo del Estado para tener vigencia."

Del precepto anterior se advierte que la Constitución Local le da al Ejecutivo Estatal la facultad de negar su sanción a los proyectos de ley o decreto que expida el Congreso y de devolverlos con observaciones, a fin de que éstas sean tomadas en cuenta y el proyecto respectivo se examine y discuta de nueva cuenta, pudiéndose superar el veto mediante la aprobación del proyecto dentro del plazo de treinta días, con el voto de las dos terceras partes del número total de miembros del Congreso.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en relación con el veto, prevé lo siguiente:

"**Artículo 163.** En el caso de que el Ejecutivo juzgue conveniente hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso del Estado, éste podrá ejercitar su derecho de veto, atendiendo a lo previsto por el artículo 34 de la Constitución Local."

"**Artículo 164.** El gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso o los emitidos por éste cuando actúe en funciones de jurado de sentencia."

En relación con la cuestión de si el veto opera respecto de actos del Congreso Local distintos a las leyes o si, por el contrario, únicamente puede ejercerse tratándose de los proyectos que gocen de las características de generalidad, impersonalidad y abstracción, como lo sostiene la parte actora, esta Sala observa que los preceptos que regulan el veto en el Estado de Baja California reiteradamente señalan que el objeto de dicha facultad lo constituyen los proyectos de *ley o decreto*, conceptos estos últimos que están definidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad en los siguientes términos:

"**Artículo 111.** Son iniciativas de ley, las que tiendan a una resolución que contemple la formación de un ordenamiento jurídico que no existía o que abrogue uno anterior."

"**Artículo 112.** Son iniciativas de reformas de ley, las que tiendan a introducir reformas consistentes en modificación, derogación o adición a un ordenamiento jurídico vigente."

"**Artículo 113.** Es Iniciativa con proyecto de decreto aquella que tienda a una resolución que otorgue derechos o imponga obligaciones a determinadas personas físicas o morales en mandamientos particulares y concretos."

"**Artículo 160.** Toda resolución del Congreso del Estado tendrá el carácter de ley o decreto. El primer nombre corresponde a las que versen sobre materias de interés común, dentro del ámbito de atribuciones del Poder Legislativo. El segundo corresponde a las que dentro del ámbito sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, entidades públicas o personas."

De los preceptos anteriores se desprende que los conceptos de ley y decreto tienen en un sentido preciso en función de su generalidad: mientras los proyectos de ley están encaminados a la creación y reforma de ordenamientos jurídicos que versen sobre materias de interés común, los proyectos de decreto tienden a la adopción de resoluciones que otorguen derechos o impongan obligaciones a determinadas personas físicas o morales en mandamientos particulares y concretos, relativas a determinados tiempos, lugares, entidades públicas o personas.

En este sentido, la distinción que hace el legislador local entre leyes y decretos se identifica con la que esta Corte ha establecido entre normas generales y actos, al señalar que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales.[13]

Así, en la medida en que la Constitución Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California prevén que la facultad de veto se pueda ejercer, tanto respecto de proyectos de ley, como de decreto, es claro que el gobernador del Estado puede formular observaciones tratándose de la expedición de normas generales, así como de actos concretos cuya emisión sea de la competencia del Congreso Local.

Las únicas excepciones que el ordenamiento local prevé, y que como tal deben interpretarse de manera estricta, son las relativas a: 1) los decretos de apertura o cierre de sesiones del Congreso; 2) los emitidos cuando el Congreso Local se erige en jurado de sentencia; 3) las reformas a la Constitución Local; y, 4) la expedición o reforma de la ley que regule la estructura y funcionamiento internos del Congreso del Estado.

Al respecto, el Tribunal Pleno, al interpretar los propios artículos 34 de la Constitución Política del Estado de Baja California, así como 163 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad federativa, estableció que "partiendo de la libertad de configuración que la Carta Magna concedió a los miembros de la Federación, el propio órgano legislativo local fue quien previó el derecho del gobernador a ejercer el veto y estipuló los casos de excepción en los cuales éste no podía participar", y que, en tal sentido, "el gobernador cuenta con aprobación constitucional para efectuar observaciones, en relación con las iniciativas o reformas emitidas por el Congreso, siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción."[14]

Por su parte, de la regulación relativa al procedimiento de creación de Municipios tampoco se advierte una excepción a la facultad de veto del gobernador, en términos de los artículos 27, fracción XXVI y 76 de la Constitución, así

---

[13] Así se ha sostenido desde la acción de inconstitucionalidad 4/98, de la que derivó la jurisprudencia, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL." (Novena Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo IX, abril de 1999, página 256, P./J. 23/99)

[14] Controversia constitucional 84/2010, p. 43.

como 27 de la Ley del Régimen Municipal, ambas del Estado de Baja California, que, en lo conducente, indican lo siguiente:

Constitución Política del Estado de Baja California

"**Artículo 27.** Son facultades del Congreso:

"...

"**XXVI.** Crear o suprimir Municipios, fijar, delimitar y modificar la extensión de sus territorios, autorizar mediante decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los Municipios; así como dirimir de manera definitiva las controversias o diferencias que se susciten sobre límites territoriales intermunicipales, modificando en su caso el estatuto territorial. Lo previsto en esta fracción se sujetará, a la emisión del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso."

"**Artículo 76.** ...

"Para crear o suprimir un Municipio se requiere:

"I. Delimitar previamente el territorio correspondiente;

"II. Realizar consulta mediante plebiscito, a los ciudadanos del Municipio que se pretenda afectar;

"III. Tomar en cuenta los factores geográficos, demográficos y socioeconómicos del territorio respectivo;

"IV. Solicitar la opinión de los Ayuntamientos afectados, la que deberá justificar la conveniencia o inconveniencia de la pretensión; y

"V. Los demás requisitos que determine la ley.

"En el caso de la fijación y modificación de los límites territoriales de los Municipios, además de lo que establezca la ley, se estará a lo dispuesto en las fracciones III y IV de este artículo.

"Los Municipios pueden arreglar entre sí, mediante convenios amistosos, sus respectivos límites territoriales; pero no se llevarán a efecto estos arreglos sin la aprobación del Congreso del Estado.

"A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante el Congreso del Estado, quien actuará en términos del artículo 27, fracción XXVI, de esta Constitución.

"Las resoluciones del Congreso en la materia serán definitivas e inatacables."

Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California

"**Artículo 27. De la creación o supresión de Municipios.** Para la creación o supresión de un Municipio, el Congreso del Estado procederá de la siguiente forma:

"I. El procedimiento se iniciará mediante solicitud expresa de los ciudadanos vecinos de la demarcación territorial que se proponga para conformar o suprimir un Municipio, suscrita en el porcentaje requerido por la ley de la materia para la procedencia del plebiscito;

"II. El Congreso del Estado conformará una comisión de diputados encargada de revisar la autenticidad y los contenidos de la documentación presentada, solicitar los dictámenes de viabilidad correspondientes y aprobar o desechar la solicitud planteada, debiendo en todo caso fundar y motivar su resolución;

"III. De resultar procedente la petición, se procederá a realizar el plebiscito correspondiente, conforme a la ley de la materia;

"IV. Una vez obtenidos los resultados del plebiscito, si éste resulta aprobatorio, se deberá solicitar la opinión fundada de los Ayuntamientos afectados, respecto de la conveniencia de la creación o supresión que se propone, la cual deberán remitir dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se les comunique la solicitud. De no hacerlo, se entenderá como opinión favorable;

"V. Agotado el procedimiento anterior, la petición será sometida a la aprobación del Congreso del Estado; y

"VI. De resultar procedente la creación de un Municipio, el Congreso del Estado designará, a propuesta del gobernador del Estado, el Concejo Municipal Fundacional, que fungirá hasta en tanto se realicen las elecciones ordinarias correspondientes, decretando las provisiones necesarias para la transferencia del patrimonio correspondiente.

"En los Municipios de nueva creación se continuarán aplicando las disposiciones reglamentarias vigentes en el Municipio del cual formaron parte, hasta en tanto emitan sus propios reglamentos."

De dichas disposiciones se advierte que:

a) El Congreso Local tiene la facultad de crear y suprimir Municipios; resolución que, en su caso, deberá contar con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes.

b) Los requisitos para la creación o supresión de un Municipio son: la delimitación previa del territorio correspondiente; la realización de una consulta mediante plebiscito a los ciudadanos del Municipio que se pretenda afectar; considerar los factores geográficos, demográficos y socioeconómicos del territorio respectivo; solicitar la opinión de los Ayuntamientos afectados, misma que debe justificar la conveniencia o inconveniencia de la pretensión, y los demás requisitos que establezca la ley.

c) Tales requisitos se encuentran reglamentados por la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California, que establece la forma en la que el Congreso Local procederá para crear y suprimir Municipios, a través de las siguientes etapas:

1. Formulación de una solicitud expresa. Los ciudadanos vecinos de la demarcación territorial que se proponga para crear o suprimir un Municipio deben formular una solicitud expresa suscrita cuando menos por el 0.5% de los electores de la lista nominal del Municipio (porcentaje previsto en el artículo 14 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California para la procedencia del plebiscito solicitado por los ciudadanos).

2. Designación de una comisión de diputados. El Congreso Local debe conformar una comisión de diputados que deberá revisar la autenticidad y contenidos de la documentación que se presente, solicitar dictámenes de viabilidad que correspondan y resolver de manera fundada y motivada la aprobación o desechamiento de la solicitud planteada.

3. Plebiscito. En caso de que la solicitud sea aprobada por la comisión conformada por el Congreso Local, se procederá a realizar el plebiscito correspondiente conforme a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.

4. Opinión de Ayuntamientos afectados. Si una vez obtenidos los resultados del plebiscito, éste resulta aprobatorio, el Congreso Local deberá

solicitar la opinión de los Ayuntamientos afectados respecto de la conveniencia de la creación o supresión propuesta. La opinión debe remitirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se comunique la solicitud. En caso de no hacerlo, se entenderá como opinión favorable.

5. Aprobación del Congreso Local mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Una vez obtenida la opinión favorable de los Ayuntamientos afectados (expresa o tácita) sobre el resultado aprobatorio del plebiscito, la petición se someterá a consideración del Congreso Local, la cual deberá ser aprobada con el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes del mismo.

6. Designación del Consejo Municipal Fundacional. En caso de resultar procedente la creación del Municipio, el Congreso designa, a propuesta del gobernador del Estado, el Concejo Municipal Fundacional, que fungirá hasta en tanto se realicen las elecciones ordinarias correspondientes y se decretarán las provisiones necesarias para la transferencia del patrimonio correspondiente. El Municipio de nueva creación se regirá bajo las disposiciones reglamentarias vigentes en el Municipio del que formaron parte, hasta que emitan sus propios reglamentos.

Como puede advertirse, los preceptos que regulan el procedimiento de creación de Municipios en el Estado de Baja California no establecen expresamente la posibilidad de que el gobernador formule observaciones al decreto de aprobación respectivo; sin embargo, ello no debe interpretarse en el sentido de que la facultad de veto no opera tratándose de este tipo de decretos, pues como se ha visto, la regla general contenida en la Constitución de dicha entidad y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo es que el veto procede respecto de todos los proyectos de ley o decreto, salvo las excepciones establecidas desde la propia Constitución Local.

En estas condiciones, debe concluirse que el gobernador del Estado de Baja California sí estaba legalmente facultado para ejercer su derecho de veto respecto del decreto de creación del Municipio de San Quintín, por lo que resta definir si ello puede actualizar un desequilibrio institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

2. Violación al principio de división de poderes

El principio de división de poderes está expresamente previsto para el ámbito estatal en artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos,[15] cuyo primer párrafo establece que el poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que puedan reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, principio que se recoge también en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Baja California.[16]

En relación con el principio de división de poderes, el Tribunal Pleno ha señalado que es una norma de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos Poderes del Estado y de las entidades federativas, mediante un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto constitucionalmente y/o afecte el principio democrático, los derechos fundamentales o sus garantías, reconocidos en la Norma Suprema.[17]

Asimismo, se ha establecido que para respetar tal equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a respetar tres

---

[15] "**Artículo 116.** El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo."

[16] "**Artículo 11.** La forma de Gobierno del Estado es republicana, representativa y popular.
"El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres Poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado.
"No pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo."

[17] Así se señala en la tesis P./J. 52/2005, de rubro y texto siguientes: "DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—La tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Tercera Parte, página 117, con el rubro: 'DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE.', no puede interpretarse en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de carácter flexible, pues su rigidez se desprende del procedimiento que para su reforma prevé su artículo 135, así como del principio de supremacía constitucional basado en que la Constitución Federal es fuente de las normas secundarias del sistema –origen de la existencia, competencia y atribuciones de los poderes constituidos–, y continente, de los derechos fundamentales que resultan indisponibles para aquéllos, funcionando, por ende, como mecanismo de control de poder. En consecuencia, el principio de división de poderes es una norma de rango constitucional que exige un equilibrio entre los distintos Poderes del Estado y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un Poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, a los derechos fundamentales, o a sus garantías." (*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 954)

mandatos prohibitivos, a saber: a) la no intromisión, b) la no dependencia y c) la no subordinación de cualquiera de los Poderes con respecto a los otros.

La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los Poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia, por su parte, conforma el siguiente nivel de violación al citado principio y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un Poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. Finalmente, la subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un Poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que, además, debe someterse a la voluntad del Poder subordinante.[18]

Ahora bien, como quedó establecido en el apartado anterior, el veto es una figura que se desprende directamente del sistema de pesos y contrapesos, propio del principio de división de poderes. El Pleno ha señalado que dicha figura atiende con plenitud a la dimensión de colaboración institucional que deriva de dicho principio, pero también ha acotado que ese instrumento no puede ser una oportunidad para subordinar al Poder Legislativo a los intereses del Ejecutivo y, por ende, debe ser limitado, es decir, debe ser superable

---

[18] "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.—El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe implícitamente tres mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, para que respeten el principio de división de poderes, a saber: a) a la no intromisión, b) a la no dependencia y c) a la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación al citado principio, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe. En ese sentido, estos conceptos son grados de la misma violación, por lo que la más grave lleva implícita la anterior." (*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, tesis P./J. 80/2004, página 1122)

conforme a los mecanismos que la norma constitucional establezca y que, en ese sentido, el veto limitado es un mecanismo de peso y contrapeso que no sólo defiende al Ejecutivo de la intromisión del Legislativo, sino que, a su vez, representa la colaboración interinstitucional en la formulación de mejores leyes.[19]

Además de establecer esa *necesaria limitación*, consistente en que el veto debe siempre ser superable, el Pleno también ha sostenido que existen ocasiones en que, a pesar de que una legislación local no contemple una excepción expresa al derecho de veto, éste no puede ejercerse respecto de determinados actos, porque ello implicaría una intromisión del Poder Ejecutivo en facultades exclusivas de los Poderes Legislativos.

En efecto, al resolver la controversia constitucional 52/2004, el Pleno determinó que del principio de división de poderes se desprende implícitamente otro principio en relación con aquellos actos que, dada su naturaleza, no pueden ser objeto de intervención por parte de otro Poder y que ello debe entenderse en el sentido de que el derecho de veto no es ilimitado, al existir actos que no pueden ser objeto de ese control, pues lejos de constreñirse a esa finalidad, vulnerarían la independencia del Poder Legislativo. Específicamente, en ese asunto se determinó que el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco invadía la esfera del Legislativo, al formular observaciones respecto del decreto por el que se designó al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado que formaba parte del Poder Legislativo Local, y que, en ese sentido, el derecho a hacer observaciones del gobernador de la entidad no podía ser ejercido respecto de esa designación.

Así, el Pleno ha reconocido que la figura del veto se inserta en la dinámica de pesos y contrapesos propia del principio de división de poderes, pero también ha establecido que esa facultad no puede ser ilimitada: por un lado, debe siempre existir la posibilidad de que el órgano legislativo supere las observaciones que se le formulen y, por otro lado, existen determinados actos respecto de los cuales no se puede ejercer.

Sentada la doctrina de esta Corte en torno a la facultad de veto y sus necesarias limitaciones a la luz del principio de división de poderes, debe determinarse si el decreto de creación de un Municipio es de aquellos actos respecto de los cuales la formulación de observaciones generaría una situación de intromisión inaceptable.

---

[19] Controversia constitucional 84/2010, pp. 24 y 25.

Como ha quedado precisado, las disposiciones que regulan la creación de nuevos Municipios en el Estado de Baja California establecen un trámite especial conformado por distintas etapas que tienden a determinar si existen suficientes elementos para garantizar la subsistencia política y económica de la nueva división territorial. Para ello, se establece la intervención de diversos sujetos: los ciudadanos interesados en la municipalización, quienes inician el procedimiento respectivo; los ciudadanos que pudieran resultar afectados, a quienes se les consulta mediante plebiscito; los Municipios posiblemente afectados, quienes deberán emitir su opinión justificada, y el propio órgano legislativo local, que analizará la procedencia de la solicitud de los ciudadanos, integrará una comisión especial que se encargará de dar seguimiento a la solicitud y analizará la documentación relativa a la creación o supresión de Municipios. Una vez cumplidas estas etapas, el Congreso Local está en condiciones de determinar la viabilidad de la nueva división territorial, resolución que deberá ser aprobada con la votación calificada de sus integrantes.

En tal contexto, esta Sala encuentra que la formulación de observaciones, tratándose de las resoluciones emitidas por el Congreso Local en materia de creación y supresión de Municipios **no resulta violatoria del principio de división de poderes**, previsto en los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del Estado de Baja California.

La creación de Municipios no es, por su naturaleza, una cuestión propia del Poder Legislativo, en la que la intervención del gobernador pueda resultar violatoria de su independencia. Si bien es de la competencia del Poder Legislativo, la creación de un Municipio es un acto que trasciende del ámbito interno de la Legislatura y cuyos efectos atañen a todos los Poderes. Es un acto de gran trascendencia, que impacta en todo el orden normativo local, lo que justifica plenamente la intervención del Ejecutivo para aportar información, o formular objeciones y cuestionamientos adicionales que pudieron no haberse tomado en cuenta durante el procedimiento respectivo.

La creación de un Municipio no tiene que ver con el autogobierno del órgano legislativo ni con mecanismos de rendición de cuentas que se proyecten sobre los otros Poderes y, en este sentido, el presente asunto *se distingue* del precedente de la controversia constitucional 52/2004, pues en aquel caso la facultad de veto generaba una intromisión del Ejecutivo en la designación del titular de un órgano que formaba parte del Legislativo y cuya función era auxiliar en la revisión de la cuenta pública; de modo que la intervención del Ejecutivo *obstaculizaba el nombramiento de un funcionario perteneciente al*

propio Poder Legislativo, llamado a fiscalizar al ejecutivo, lo que, sin duda, generaba un desequilibrio institucional que no está presente en el caso que nos ocupa.

En estas condiciones, en la medida en que el gobernador del Estado de Baja California estaba facultado para ejercer su veto en este supuesto y que ello no resulta violatorio del principio de división de poderes, los conceptos de la parte actora resultan infundados, lo que lleva a reconocer la validez de las observaciones al decreto de creación del Municipio de San Quintín que aquí se impugnan.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO.—Se sobresee en la controversia respecto de los actos precisados en el considerando segundo de este fallo.

TERCERO.—Se reconoce la validez de las observaciones emitidas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, mediante oficio sin número de diecisiete de julio de dos mil trece, emitido en los términos previstos en el considerando octavo.

CUARTO.—Publíquese esta sentencia en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*.

Notifíquese; haciendo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas el *Semanario Judicial de la Federación*.

TERCERA PARTE

SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECCIÓN PRIMERA
JURISPRUDENCIA

Subsección 1.
POR REITERACIÓN

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD.

AMPARO EN REVISIÓN 256/2014. 13 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 84, fracción I, de la anterior Ley de Amparo; tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo previsto en los puntos primero y segundo, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, toda vez

que se promueve contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa.

No pasa inadvertido para la Segunda Sala, el hecho de que el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento; sin embargo, en el presente asunto se seguirá aplicando la anterior Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo tercero transitorio del ordenamiento jurídico citado en primer término, debido a que el juicio de amparo inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, pues la demanda de garantías se presentó el once de marzo de dos mil trece.

SEGUNDO.—No es el caso de analizar la oportunidad del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, ni su legitimación, pues de esos aspectos se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento.

TERCERO.—En el escrito de agravios, la recurrente aduce:

Primero. La sentencia recurrida no está debidamente fundada y motivada, porque no se analizó el concepto de violación en el que se planteó que el párrafo cuarto del artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en relación con la fracción II del artículo segundo del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, publicado el cinco de diciembre de dos mil ocho, viola el principio de equidad tributaria, además, contrario a lo que sostuvo el Tribunal Colegiado de Circuito, el estímulo de que se trata sí puede analizarse a la luz de los principios tributarios, ya que no se reclamó la inequidad de la disposición impugnada a la luz de la obligación de enterar o no el impuesto retenido a los trabajadores, sino la distinción injustificada entre los organismos descentralizados y Municipios y el resto de los contribuyentes, en cuanto a la reducción de los pagos provisionales por concepto de impuesto sobre la renta, pese a encontrarse en la misma situación al tener trabajadores a su cargo, aunado a que el ámbito de aplicación del principio de equidad opera respecto de la obligación de pago de una contribución, y no está referido sólo a los elementos esenciales de la contribución.

Segundo. Contrario a lo que resolvió el Tribunal Colegiado de Circuito, el artículo 9o., párrafo cuarto, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en relación con la fracción II del artículo segundo del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, publicado el cinco de diciembre de dos mil ocho, sí contraviene el derecho de igualdad,

lo que evidencia que el Juez de Distrito actuó de manera ilegal y que su sentencia no está debidamente fundada ni motivada, porque los organismos descentralizados y los particulares se encuentran en un plano de igualdad, en lo que se refiere a su carácter de patrones retenedores, máxime que las relaciones laborales entre los organismos descentralizados y sus trabajadores se deben ajustar, al igual que los particulares, al apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, sin que tenga relevancia alguna si se persiguen o no fines de lucro. Asimismo, debió ponderarse que las razones en las que se fundamenta y justifica el Ejecutivo para otorgar los estímulos contenidos en el decreto reclamado, consistentes en corregir la situación fiscal de los organismos descentralizados estatales y municipales y la búsqueda del equilibrio de las finanzas públicas, no van dirigidas a un área en específico que se considere de alto interés nacional (área prioritaria) y que, por razones económicas, sociales o de urgencia, requieran de una atención especial para el desarrollo nacional; por el contrario, parece que se pretende cubrir las deficiencias por parte de los Estados y Municipios, así como de sus organismos descentralizados causados por la corrupción, la evasión de impuestos y el sobreendeudamiento de los anteriores, producto de una inadecuada administración.

CUARTO.—Antes de dar respuesta a los agravios expresados, es indispensable conocer el texto de las disposiciones impugnadas, a saber:

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013

"Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el ramo de hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

"Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los Municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los Municipios, por las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las mismas, que pasen a propiedad del fisco federal.

"En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 Bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

"Las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que se hubieran adherido al 'Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, se les extenderá el beneficio referido en el artículo segundo, fracción I de dicho decreto, hasta el ejercicio fiscal de 2012 y anteriores, siempre y cuando se encuentren al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012. Dichos órdenes de gobierno, en lugar de aplicar los porcentajes establecidos en el artículo segundo, fracción II del mencionado decreto, podrán aplicar el 60 por ciento para el año 2013 y el 30 por ciento para el año 2014."

Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos

"Artículo segundo. Las entidades federativas y Municipios que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo tercero de este decreto gozarán de los beneficios fiscales siguientes:

"I. Condonación del total de los adeudos, incluyendo sus accesorios, que tengan por la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2005 y anteriores.

"II. Un estímulo fiscal para los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, que se aplicará de manera mensual y se determinará para cada uno de los meses de dichos ejercicios aplicando el por ciento señalado en la siguiente tabla al excedente que resulte de comparar el promedio mensual del total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores efectivamente enterado, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007, y el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores que efectivamente corresponda enterar en el mes de que se trate, de los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, siempre que este último monto sea mayor. El resultado obtenido será el monto del estímulo que podrán acreditar en el pago del mes de que se trate, contra el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores que deban enterar en dicho mes.

"Año	Estímulo %
2009	60
2010	30
2011	10

"En caso de que en alguno de los meses de los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011 no se haya aplicado el estímulo a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, el mismo se podrá aplicar a cualquiera de los meses siguientes, siempre y cuando se trate del mismo ejercicio fiscal. ..."

De esas disposiciones legales puede advertirse que a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo organismos descentralizados y autónomos, que previamente se hubieran adherido al Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, publicado el cinco de diciembre de dos mil ocho, y que estén al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de dos mil doce, se les extiende hasta dos mil catorce, el beneficio fiscal consistente en pagar sólo determinado porcentaje del total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

En otras palabras, el estímulo fiscal se otorgó en cuanto a la retención del impuesto sobre la renta de los trabajadores a cargo de las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo organismos descentralizados y autónomos, en su carácter de patrones retenedores, en relación con su obligación formal de retener y enterar a la autoridad federal dicho impuesto.

Cabe mencionar que de esos preceptos no se advierte que se altere ni modifique el impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores de esos entes públicos, sino únicamente los ingresos que por ese concepto deben enterar a la Federación.

En efecto, los entes públicos, tratándose de su obligación o carga fiscal de retener y enterar el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, se despojan de su imperio frente a los gobernados y se ubican en el mismo plano de los particulares, pues obedece a su relación patronal; por tanto, el estímulo fiscal contenido en la Ley de Ingresos de la Federación y en el decreto reclamados por la ahora recurrente, les fue otorgado en su carácter de patrones retenedores solidarios del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, esto es, ubicándose en el mismo plano de los patrones particulares que también tienen esa carga fiscal.

Además, tanto los trabajadores de la iniciativa privada, como los de la Federación, entidades federativas, Municipios y sus organismos descentralizados, son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, por los ingresos que obtengan con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con independencia de que el origen de su relación de trabajo sea distinta, criterio que fue reconocido por

el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en las jurisprudencias, cuyos datos de localización, rubros y textos son los siguientes:

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XVI, diciembre de 2002
"Tesis: P./J. 47/2002
"Página: 9

"RENTA. LOS TRABAJADORES TANTO DE LA INICIATIVA PRIVADA COMO DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS SON SUJETOS DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LOS INGRESOS OBTENIDOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.—De lo dispuesto en el título IV, capítulo I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, se advierte que el sujeto pasivo obligado al pago del tributo relativo es la persona física que presta un trabajo personal subordinado y que la base imponible está constituida por el importe de los ingresos obtenidos durante el periodo de imposición que provengan de toda contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, pero que retribuya la prestación de un servicio personal subordinado como consecuencia de una relación laboral o asimilada a ella. En ese tenor, tanto los trabajadores de la iniciativa privada como los de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, son sujetos del impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, con independencia de que en un caso deriven de una relación laboral (trabajador-patrón) y, en el otro, de una relación administrativa equiparada a la laboral (servidor público-Federación, Estado o Municipio), ya que si bien el origen de la relación es distinta, lo cierto es que, desde el punto de vista fiscal, se considera que los ingresos sometidos a gravamen son los salarios y sueldos, así como cada una de las partes que lo integran, tales como aguinaldo, ayuda para el transporte, bono de productividad, gratificaciones, entre otras."

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XVI, diciembre de 2002
"Tesis: P./J. 49/2002
"Página: 8

"RENTA. LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SE ENCUENTRAN EN UN PLANO DE IGUALDAD LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO A UN PATRÓN Y QUIENES LO HACEN AL ESTADO.—Aun cuando la Suprema

Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias entre la relación jurídica de los patrones con sus trabajadores, por una parte, y la relación entre el Estado y sus servidores, por la otra, derivadas de su naturaleza jurídica, ello trasciende a la materia laboral y aun a la competencia de los tribunales que conocen de las respectivas controversias, pero para efectos tributarios tales diferencias no existen. En ese sentido, del análisis integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, se concluye que los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas se ubican en la misma hipótesis de causación del impuesto, establecida en el artículo 110 de la ley citada, que los demás trabajadores asalariados, por los ingresos que perciben por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pues todos ellos experimentan modificación patrimonial positiva, al recibir gratificaciones y tienen derecho a las mismas deducciones personales, por lo que, en principio, deben encontrarse sometidos al mismo régimen tributario, ya que la ley no prevé, en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, con lo que se confirma que éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad frente a la ley tributaria en mención, con los demás trabajadores asalariados."

Aclarado ese aspecto, resulta necesario hacer algunas reflexiones respecto a los estímulos fiscales, su significado, alcance y diferencias con las exenciones fiscales, para fijar el plano jurídico en el que se desarrollará la litis propuesta.

Dado que el reclamo de la parte quejosa deriva de la aplicación de un estímulo fiscal contemplado en un decreto presidencial, resulta necesario analizar la facultad legislativa establecida por el Congreso de la Unión, a fin de determinar los efectos que produce frente a una obligación tributaria, permitiéndose así contemplar su naturaleza jurídica y, por ende, si le resultan aplicables los principios constitucionales de la materia tributaria.

En tal virtud, es ilustrativo en ese aspecto el texto del artículo 25 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil trece (año del ejercicio que reclama la quejosa), el cual regula la forma en la que se realiza el acreditamiento de los denominados "estímulos fiscales", y que establece:

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"Artículo 25. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las cantidades que están obligados a pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en materia de estímulos

fiscales y, en su caso, cumplan con los demás requisitos formales que se establezcan en las disposiciones que otorguen los estímulos, inclusive el de presentar certificados de promoción fiscal o de devolución de impuestos. En los demás casos siempre se requerirá la presentación de los certificados de promoción fiscal o de devolución de impuestos, además del cumplimiento de los otros requisitos que establezcan los decretos en que se otorguen los estímulos.

"Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a que tengan derecho, a más tardar en un plazo de cinco años contados a partir del último día en que venza el plazo para presentar la declaración del ejercicio en que nació el derecho a obtener el estímulo; si el contribuyente no tiene obligación de presentar declaración del ejercicio, el plazo contará a partir del día siguiente a aquel en que nazca el derecho a obtener el estímulo.

(F. de E., D.O.F. 13 de julio de 1982)

"En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la obligación de cumplir con requisitos formales adicionales al aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se entenderá que nace el derecho para obtener el estímulo, a partir del día en que se obtenga la autorización o el documento respectivo.

"(Derogado último párrafo, D.O.F. 28 de junio de 2006)."

El artículo citado hace referencia a los diversos requisitos a los que se encuentra sujeto el beneficio de los estímulos fiscales por parte de los destinatarios de éstos. Si bien dicho numeral declina frente a las "*disposiciones que otorguen los estímulos*" para el establecimiento de requisitos formales, permite apreciar que la materia del beneficio consiste en "*acreditar el importe de los estímulos … contra las cantidades que están obligados a pagar*."

El denominado "*estímulo*" es una cantidad que si no se toma en cuenta en las cantidades que deben ser ingresadas al erario, es decir, se trata de una disminución del importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible de un determinado tributo.

En este sentido, el señalamiento que se hace en el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación como "*acreditamiento*" de estímulos, impacta en el impuesto a pagar.

En el impuesto sobre la renta, por ejemplo, al *acreditar* contra el impuesto anual las cantidades cubiertas mediante pagos provisionales o por concepto

de impuesto sobre la renta pagado en el extranjero; de la misma manera, se *acreditan* contra el impuesto a cargo del patrón, las cantidades que éste hubiere entregado a sus trabajadores por concepto de crédito al salario. En el impuesto al valor agregado, al igual que en el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto trasladado al causante por sus proveedores, se *acredita* contra el impuesto causado. Finalmente, el impuesto sobre la renta efectivamente pagado en el ejercicio, se *acredita* contra el impuesto al activo del mismo periodo.

En todos esos supuestos el acreditamiento reduce directamente la cantidad a pagar por contribuciones causadas, peso por peso, a diferencia de lo que ocurre con las deducciones, que reducen la cantidad a pagar de manera indirecta, esto es, en función de la tasa, motivo por el cual, no influyen según su valor nominal.

La distinción entre los efectos jurídicos que corresponden a la exención, por un lado, y a las medidas implementadas como estímulos fiscales, por el otro, se corrobora si se acude a lo establecido por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la controversia constitucional 32/2002, fallada por unanimidad de once votos, en sesión del doce de julio de dos mil dos, mediante la cual, se fijaron los lineamientos y requisitos a los cuales se debe apegar el legislador cuando decide incorporar una exención en la ley para beneficiar a cierto grupo de contribuyentes, precisando, inclusive, el concepto de exención.

De dicha resolución pueden advertirse los siguientes aspectos:

• Atendiendo al principio de reserva de ley, el Congreso de la Unión es el órgano facultado para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público. Este principio obliga al legislador a que la creación de un tributo contenga todos los elementos esenciales del mismo (sujeto, objeto, base, cuota, tasa o tarifa), para lograr la plena seguridad jurídica de los contribuyentes. Lo anterior se colige de una interpretación sistemática del principio de división de poderes, de las facultades del Congreso de la Unión y de las obligaciones de los mexicanos, realizada por el Tribunal Pleno, atento a lo dispuesto en los artículos 31, fracción IV, 49, 50, 70 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• En relación con lo anterior, se precisó que se prevén constitucionalmente dos excepciones: la primera, se refiere a las facultades extraordinarias que se conceden al Poder Ejecutivo, en términos del artículo 29 de la Constitución Federal y, la segunda, se establece en el artículo 131 de la propia Carta Magna, que autoriza al Congreso de la Unión para facultar al Ejecutivo Federal

para legislar sobre tarifas de exportación e importación, debiendo aprobar el Congreso la utilización de la facultad concedida anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación.

• El Tribunal Pleno precisó que, al señalarse en la Constitución Federal que están prohibidas las exenciones "*en los términos y condiciones que fijan las leyes*", establece también una reserva a la ley, esto es, que las exenciones de impuestos corresponden al ejercicio de atribuciones que se reservan al Poder Legislativo.

• No se trata de una prohibición absoluta, sino que el Órgano Revisor de la Constitución lo que prohíbe es la exención de impuestos cuando se trata de favorecer a determinada persona, confiriendo un verdadero privilegio en su favor, mas no cuando la exención alcanza a toda una categoría de personas por medio de leyes de carácter general.

• En este sentido se delimitó el concepto de "*exención*" en materia impositiva, señalándose que consiste en que, conservándose los elementos de la relación jurídica tributaria (sujetos, objeto, base, cuota, tasa o tarifa), por razones de equidad o política económica, ***se eliminan de la regla general de causación hechos o situaciones gravables (exención objetiva)***, o bien, ***se declara no obligada al pago del tributo a una categoría de personas que, conforme a las disposiciones generales, quedarían comprendidas entre los sujetos pasivos, pero que por motivos circunstanciales de índole económica o social, se declararan exentos (exención subjetiva)***.

Sobre esas premisas es evidente que se trata de una reducción frente al impuesto que se hubiere causado, con lo cual, no queda margen de duda sobre el hecho de que los destinatarios del estímulo no fueron eliminados de la regla general de causación, atendiendo a la "exención objetiva" delimitada por el Tribunal Pleno.

Existe, por tanto, una estrecha vinculación entre la exención en el pago de un tributo y cierta clase de beneficios que se otorgan a actividades prioritarias que llevan a cabo las empresas públicas o aquellas en las que participan los sectores social y privado, a fin de estimular y no desalentar el crecimiento de cierta categoría de contribuyentes o sector productivo de la economía nacional.

Al respecto, para analizar por qué el Estado les concede alguna preferencia a las personas físicas o morales que realizan las actividades prioritarias, es preciso analizar cuáles son éstas, para lo cual, debe destacarse que

el Estado no se limita a contemplar el desarrollo de las fuerzas económicas del país, sino que planea, conduce, coordina y orienta las actividades productivas, es decir, no sólo fomenta aquellas actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Carta Magna, sino que conduce los factores que condicionan las distintas opciones de la propia participación de los poderes públicos (entidades públicas empresariales), así como de las personas físicas o morales que pertenecen al sector privado o social y que tratan de conseguir ciertos objetivos que se consideran relevantes para el beneficio de la colectividad, en algunos casos proscribiéndolas, en otros sujetándolas al cumplimiento de determinados requisitos o condiciones y, en otros casos, incentivándolas o amparándolas con leyes expedidas por el Congreso de la Unión.

Por tanto, es posible que en el desarrollo económico nacional participen tanto empresas públicas, a las que se les encomienda la realización de actividades de fomento o prestación de servicios, como empresas de los sectores social o privado, cuya función consiste en la prestación o gestión de servicios, y en la producción de bienes o satisfacción de necesidades que se consideran de interés general, lo que se basa en lo previsto en la Constitución Federal, que al mismo tiempo que dispone que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, áreas estratégicas, establece que dicho sector podrá participar, por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, en el impulso y organización de las áreas prioritarias del desarrollo; lo que conlleva a considerar que el Estado tiene un "*régimen de economía mixta*", que implica la concurrencia de una economía de mercado y, al propio tiempo, la intervención de aquél, ya sea de manera exclusiva en ciertas actividades específicas por cuestiones de seguridad nacional o interés social fundamental o, en otros casos, mediante la implementación de una protección legal suficiente a favor de ciertas empresas estatales o privadas, cuyo pleno desarrollo de la actividad económica de que se trate es necesario mantener e impulsar, con la finalidad de lograr el desarrollo y estabilidad económica, social y política del país.

Es cierto que la Ley Suprema establece determinadas áreas económicas en las que únicamente puede participar el sector público denominadas "*estratégicas*", tales como: correos, telégrafos, radiotelégrafos, petróleo, electricidad, entre otras; pero también contempla otras en las que, si bien el Estado también se encuentra interesado en su mantenimiento, organización y crecimiento, no las restringe únicamente para él, sino que permite la colaboración de los sectores social y privado para llevarlas a cabo, a las que les otorga el carácter de "áreas prioritarias" para el desarrollo nacional, las que están referidas a la comunicación vía satélite y los ferrocarriles de manera

enunciativa y no limitativa, ya que el Estado, al determinar y revestir de ese carácter a ciertas áreas o actividades, toma en cuenta las necesidades nacionales que pueden variar de acuerdo a las circunstancias económicas sociales, ambientales y culturales que se requieran para la satisfacción del interés general, en relación con las cuales, por virtud de la situación en que se encuentran, es indispensable adoptar ciertas acciones, a fin de incentivarlas y garantizar su subsistencia, representando para el ente federal una utilidad mayor que el gasto que produciría su reemplazo, además de que implican un beneficio para la colectividad.

Lo anterior se corrobora de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al señalar:

"Artículo 6o. Para los efectos de esta ley, se consideran áreas estratégicas las expresamente determinadas en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

"Se consideran áreas prioritarias las que se establezcan en los términos de los artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución, particularmente las tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares."

En esa tesitura, las denominadas "*áreas prioritarias*" no sólo son las que expresamente señala la Ley Fundamental, sino aquellas que, por razones de política económica y social, el Estado considera relevantes para el interés nacional y la satisfacción de las necesidades colectivas, y que, por virtud de su naturaleza, debe otorgarles una cierta preferencia dentro del contexto general ante las consecuencias que implicarían no atenderlas en el momento oportuno.

En otras palabras, no es posible citar en forma precisa cuáles son las "*áreas prioritarias*", pues el Estado puede organizar un sistema de planeación democrática, de desarrollo nacional, otorgando al Ejecutivo Federal la facultad de establecer los procedimientos de participación y consulta popular, a través de los cuales se recojan las demandas sociales, a fin de incorporarlas a los planes y programas de desarrollo. Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Federal, la actividad financiera del Estado, tratándose de "*áreas prioritarias*", en las que puede concurrir la participación de los sectores público, social y privado, tendrá como premisas esenciales los fines de la organización estatal y ésta decidirá económicamente sus acciones, que se caracterizarán por cotejar recursos, gastos y grado de beneficio a favor del interés general, que contribuyen a la estabilización de la

economía, además de incentivar y estimular ciertas actividades que se encuentren incluidas dentro de algún área que se considere de prioridad nacional.

Lo anterior implica que la actividad financiera del Estado en el rubro de referencia puede ser utilizada como un instrumento de política de desarrollo y estabilización que propicie un crecimiento mayor desde el punto de vista económico, cultural y social, de aquel que se obtendría sin su intervención, por lo que en ese aspecto determina que, por razones de interés general, es conveniente estimular a ciertas categorías de contribuyentes o sectores económicos que lleven a cabo las actividades de mérito, bien sea proporcionando ayudas económicas o sacrificando, en cierta medida, recursos que tendría derecho a recaudar, mediante subsidios que pueden implicar para el Estado:

a. Un gasto: que consistirá en aportar o invertir recursos a una actividad, que se considera instrumento de producción de un bien o servicio.

b. Una disminución de ingresos: que se configuran como técnicas desgravatorias que afectan la cuantificación de recursos mediante exenciones totales o parciales, deducciones de la cuota, acreditamiento de contribuciones, reducciones de la base imponible y otras.

Como puede apreciarse, es en el último supuesto descrito, el relativo a los subsidios como disminución de ingresos públicos, en el que pueden observarse elementos comunes entre las exenciones y los estímulos fiscales, en tanto que ambos se traducen en que el gobernado no cubrirá el tributo correspondiente, aunque se actualice mediante una exclusión de la regla de causación en las exenciones, afectando la configuración normativa de los elementos esenciales del tributo, y a través del acreditamiento de una cantidad equivalente al impuesto causado en el estímulo fiscal, sin que trascienda a los referidos elementos esenciales.

En materia de subsidios que se conceden para fomentar el desarrollo de "*áreas prioritarias*", la Constitución Federal prevé que se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación, conservando el Estado la obligación de vigilar su aplicación y evaluar los resultados; en esta medida, los subsidios no se destinan a cualquier actividad mercantil, social o cultural, sino que deben dirigirse, necesariamente, a áreas que se consideren de alto interés nacional y que, por razones económicas, sociales, culturales o de urgencia requieran de una atención especial para el desarrollo nacional.

De las consideraciones precedentes puede entenderse que el señalamiento relativo a que "*se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias,*

cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación", delimita la actuación de fomento del Estado en lo que concierne a las materias fiscal y financiera, que está integrada por aquellas medidas de ingresos y gastos públicos que orientan, incentivan e imprimen cierto sentido a la actividad económica privada y social hacia la producción de determinados bienes y servicios, necesarios para la colectividad o que resultan de interés público, criterio ya corroborado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CXXII/99, de rubro: "SUBSIDIOS. NATURALEZA JURÍDICA.", de la que se aprecia que los subsidios constituyen una atribución constitucional de la autoridad legislativa y, excepcionalmente, del Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades reglamentarias, consistente en una ayuda de carácter predominantemente económico, que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado.

Esas precisiones permiten analizar los argumentos de la recurrente, en los que se insiste, básicamente, en que la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece y el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, publicado el cinco de diciembre de dos mil ocho, contravienen el principio de equidad tributario y el derecho de igualdad, y no se trata de un área prioritaria respecto de la cual procedía el establecimiento del beneficio fiscal.

Sobre el particular, este Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que el principio de equidad radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo gravamen, los que, en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, entre otros conceptos, de lo que se deriva que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, sin que esto implique que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, el principio aludido se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, lo es ante la ley y ante su aplicación.

Se ha precisado el alcance de ese principio señalando que resulta aplicable el establecimiento, a través de un texto formal y materialmente legislativo, de las contribuciones *(impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos y los accesorios de dichos ingresos tributarios)*, de las exenciones previstas con motivo de éstas, así como a las obligaciones sustantivas de la materia tributaria e, inclusive, a las formales, siempre y cuando éstas incidan directamente sobre las sustantivas.

Respecto a la aplicación de ese principio a las obligaciones distintas a las sustantivas, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XXI, enero de 2005
"Tesis: 2a./J. 183/2004
"Página: 541

"EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO RIGE EN OBLIGACIONES SUSTANTIVAS Y FORMALES, PERO EN ESTA ÚLTIMA HIPÓTESIS ES BÁSICO QUE INCIDA DIRECTAMENTE SOBRE LAS PRIMERAS.—El cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal tiene un contenido económico que se traduce en el pago en dinero de las sumas que el poder público legislativamente determina por medio de una contribución, cuya cuantía impone al causante. En ese tenor, el principio de equidad tributaria previsto en la citada Norma Suprema está dirigido a todos los elementos fiscales vinculados directamente con la causación, exención, devolución, entre otras figuras fiscales que inciden en la obligación sustantiva relativa al pago de la contribución, es decir, no sólo los referidos al sujeto, objeto, tasa y base, trascienden a la obligación esencial de pago, sino también algunas obligaciones formales, que no son simples medios de control en la recaudación a cargo de la autoridad administrativa, ya que están estrechamente vinculadas con el núcleo del tributo (pago), siendo que en este supuesto igualmente rige a plenitud el citado principio de justicia fiscal."

El contenido del principio de equidad requiere, entonces, que los sujetos de una misma contribución guarden una situación de igualdad frente a la norma jurídica que establece y regula el gravamen, esto es, se ha circunscrito su proyección a un ámbito específico de aplicación; empero, ese principio no tiene menor o mayor valor que el derecho de igualdad, sino que es una manifestación concreta de este último, pues el modo en que este Alto Tribunal ha

delimitado el ámbito específico de aplicación del principio de equidad tributaria, necesariamente debe dar lugar a que, sobre la base de que la Carta Magna no establece excepciones a la garantía de igualdad, cuando las disposiciones analizadas no correspondan a dicho ámbito, es decir, cuando se trata de normas que no se refieren a contribuciones, excepciones o a la delimitación de obligaciones sustantivas o formales que incidan directamente en aquéllas. Los argumentos que denuncian la existencia de un trato diferenciado o discriminatorio entre dos personas o grupos, deben ser analizados en el contexto más amplio que corresponde a la garantía de igualdad.

De esta manera, resulta necesario determinar si la diferencia entre patrones retenedores que se evidencia en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en su artículo 9o., párrafo cuarto, relacionado con el decreto que se reclama, es de aquellas que son susceptibles de actualizar una afectación en materia tributaria sustantiva *(analizables desde la óptica del principio de equidad)*, o bien, si es en lo que concierne a obligaciones formales sin repercusión en lo sustantivo *(lo cual debería ser analizado desde el derecho de igualdad)*.

Como ya se había mencionado, en los preceptos cuestionados se otorgó un estímulo fiscal a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, en su carácter de patrones retenedores del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en relación con su obligación formal de retener y enterar a la autoridad federal el impuesto relativo a cargo de sus trabajadores.

Esa determinación modifica o altera, para los entes públicos en él indicados, en su carácter de patrones, su obligación formal de enterar a la Federación, el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, que hubiesen retenido, concediendo beneficios específicos para los adeudos que, por ese concepto, dichos entes públicos tuvieran pendientes.

Los patrones, sean particulares o entes públicos, en el caso específico de su obligación formal como retenedores del impuesto sobre la renta, tienen una función que, para efectos de estudio y análisis, se entiende referido a dos aspectos:

1. Cuando esa obligación de retenedores lleva implícita su calidad de responsables solidarios del sujeto pasivo de la contribución. En este sentido, se ha sostenido que el hecho de ser responsables solidarios, les da derecho a impugnar las normas legales que inciden en el tributo del que son responsables solidarios, esto es, se les ha tenido por acreditado su interés jurídico, para interponer los medios de defensa correspondientes; máxime que ellos

responden por el adeudo, pero no los convierte en sujetos pasivos del tributo; su situación de retenedores los coloca virtualmente en el lugar del sujeto pasivo obligado, pero no puede considerárseles estrictamente como sujetos pasivos de la contribución, porque la ley no los contempla así.

2. Cuando en su calidad de retenedores tienen la obligación de enterar a la autoridad fiscal, el impuesto sobre la renta que retuvieron en los términos y plazos que señala la ley de la materia. En este aspecto se aprecia su función de auxiliares de la administración pública, y fue este punto, el que, en su momento, originó confusión y discrepancias para reconocerles su interés jurídico para impugnar las normas que inciden en la contribución *(de la que, como ya se dijo, la ley los considera responsables solidarios)*.

Es en este segundo aspecto, en el que la ley y decreto reclamados, pudieran provocar un trato distinto entre patrones retenedores que se encuentren en igual situación jurídica, respecto a su obligación formal de enterar a la autoridad fiscal correspondiente, el impuesto retenido de sus trabajadores, obligación formal que, evidentemente, no incide en las normas sustantivas que rigen el impuesto sobre la renta, esto es, no altera alguno de los elementos de la contribución, ni tampoco se trata de una obligación formal que incida en alguno de esos elementos esenciales del tributo, puesto que los patrones retenedores del tributo no son considerados por la ley como sujetos pasivos de la contribución.

En otras palabras, se trata de una obligación formal *(enterar el impuesto sobre la renta a la autoridad fiscal correspondiente)*, que no incide en los elementos de la contribución y, por ello, no es posible analizarla desde la óptica del principio de equidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, pese a que la recurrente esgrima que el ámbito de aplicación del principio de equidad opera respecto de la obligación de pago de una contribución, pues, dadas las razones anotadas, se insiste, se trata de una obligación formal que no incide en las normas sustantivas que rigen el impuesto en comento; lo que conduce en ese aspecto a confirmar la sentencia recurrida, al resultar infundado el agravio primero.

En los agravios segundo y tercero se controvierte la decisión del Juez de Distrito, al considerar que los preceptos legales reclamados respetan el derecho de igualdad, pues la recurrente aduce que se otorga un trato diferente entre patrones retenedores particulares y patrones retenedores entes públicos, pese a encontrarse en igual situación jurídica respecto a su obligación formal de enterar a la autoridad fiscal correspondiente, el impuesto retenido de sus trabajadores, aunado a que no puede considerarse que se trata de un área prioritaria que exigiera del establecimiento de dicho beneficio fiscal.

Para el debido estudio de los agravios expresados por la quejosa, es necesario dejar claro lo atinente a las facultades del Poder Ejecutivo en materia tributaria, así como los alcances del derecho fundamental de igualdad.

Como ya se mencionó, el artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación extiende, hasta dos mil catorce, el beneficio otorgado en el decreto que se impugna para las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo organismos descentralizados y autónomos, consistente en poder acreditar determinados porcentajes de la cantidad retenida a sus trabajadores por concepto de impuesto sobre la renta, con la finalidad de no enterar el total de la cantidad retenida.

Como puede apreciarse, en realidad, el beneficio se otorga en el decreto, pues en la Ley de Ingresos únicamente se extiende dicho estímulo hasta la fecha citada.

Como ya se explicó, esa prerrogativa del Ejecutivo Federal fue en ejercicio de sus facultades establecidas en los artículos 89, fracción I, de la Constitución Federal y 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, así como en el 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El referido artículo 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece:

"Artículo 39. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

"...

"III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.

"Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados."

Como puede advertirse, dichas facultades están referidas a conceder subsidios o estímulos fiscales, en relación con la función de recaudación que tiene atribuida el Poder Ejecutivo Federal, esto es, en razón de que el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado y es al Ejecutivo Federal a quien corresponde recibir o cobrar las contribuciones que establezca el órgano legislativo, en ejercicio de la facultad que a este último le confiere el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Federal.

El Poder Ejecutivo está obligado a ejercitar la facultad recaudatoria que le encomiendan la Constitución Federal y las leyes del Congreso de la Unión, atemperando su ejercicio en contingencias que puedan o no presentarse, o bien, en sucesos derivados de causas exteriores o interiores del país, que justifiquen el otorgamiento de subsidios o estímulos fiscales transitorios, a fin de evitar que se ocasionen mayores daños o perjuicios a los sujetos o grupos que los resienten, lo que no implica, en modo alguno, el desconocimiento de los principios constitucionalmente tutelados de los gobernados, pues se encuentra, desde luego, sometido a los derechos fundamentales que orientan el orden jurídico, así como al respeto de las demás disposiciones constitucionales que establecen límites y reglas al ejercicio del Poder Estatal.

En esas condiciones, si bien el ejercicio de la facultad a la que se refiere el numeral ordinario no modifica el *sistema de determinación* del impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores que prestan un servicio personal subordinado y no se sujeta a los principios de proporcionalidad y equidad, lo cierto es que debe reconocerse que el ejercicio de dicha atribución sí trasciende al *pago* o entero del referido gravamen que realizan los patrones retenedores al Estado y, por lo tanto, debe efectuarse de tal manera que no se afecten otros derechos constitucionales y, específicamente, en lo que interesa, el de igualdad.

Sobre el particular, debe tenerse presente que el principio de igualdad consiste en el disfrute de los derechos que la Constitución Federal reconoce; en la prohibición de discriminar por cualquier motivo y de cualquier otro modo que implique un menoscabo para la dignidad humana o para los derechos y libertades de las personas; en el deber de los distintos niveles territoriales de poder, de establecer las instituciones y políticas necesarias para garantizar los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, con vistas a promover su igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria; en la no distinción por razón de sexo; en garantizar la igualdad en un proceso jurisdiccional, y la fracción IV del artículo 31, en la imposición a los mexicanos de la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, lo que proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo.

En las relatadas condiciones resulta innegable que, en todo caso, deberá justificarse plenamente la pretensión de establecer un trato diferenciado; de esta manera, a fin de salvaguardar el derecho constitucional de igualdad, la norma que rige la distinción en el tratamiento debe ser fundada y motivada, precisándose las consideraciones por las que se efectúa la diferenciación, siendo ésta la materia a través de la cual se ejerce el control de constitucionalidad de las actuaciones de la autoridad, esto es, el núcleo del

principio de igualdad queda establecido en términos de la razón suficiente que justifique el trato desigual; el problema queda concentrado, entonces, en la justificación de éste, que se efectúa a través de la debida fundamentación y motivación de la disposición de que se trate.

A efecto de realizar el control de constitucionalidad de las leyes o actos, en casos en los que se planteen cuestiones de igualdad, lo esencial es explicitar sobre la base de qué criterios y con qué fines deben considerarse iguales o desiguales dos o más situaciones. Sólo así será posible marcar la necesaria diferencia entre las distinciones que son constitucionalmente legítimas y aquellas que no lo son.

En otras palabras, ante un caso en el que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizarse si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una "*discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas*."

En ese orden de ideas, es necesario determinar si la distinción entre patrones retenedores, que se contiene en la ley y decreto reclamados, tiene una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, pues no se pueden introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerse con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas; por lo tanto, debe ponderarse, ante todo, que esa medida surgió del decreto emitido por el presidente de la República, denominado "*Decreto por el que se otorgan a las entidades federativas los estímulos fiscales que se indican*", el cual se publicó el miércoles cinco de marzo de dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación; así como de los dos diversos decretos que lo reformaron, denominados "*Decreto por el que se exime del pago de contribuciones federales, se condonan recargos de créditos fiscales y se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas, a los contribuyentes que se indican*" y "*Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales*", que se publicaron, respectivamente, los días miércoles veintitrés de abril de dos mil tres, y miércoles veintiséis de enero de dos mil cinco, que establecen:

1) "*Decreto por el que se otorgan a las entidades federativas los estímulos fiscales que se indican*", publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles cinco de marzo de dos mil tres, el cual literalmente dice:

"Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracción III del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

"CONSIDERANDO

"Que resulta de gran importancia continuar avanzando en el fortalecimiento de las haciendas de las entidades federativas, a través de programas que permitan mejorar la distribución racional de sus fuentes de ingresos;

"Que derivado de la problemática que enfrentan las entidades federativas en el pago del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, resulta necesario el establecimiento de un mecanismo que permita a las citadas entidades federativas corregir su situación fiscal, mediante la instrumentación de un esquema de estímulos fiscales;

"Que el mencionado esquema significa un importante alivio a las finanzas públicas de las entidades federativas y de los Municipios, al tiempo de permitir que no se afecten los salarios de sus trabajadores, y

"Que con el fin de alcanzar el objetivo antes planteado y de lograr que las entidades federativas con disposición a regularizarse encuentren una solución definitiva a su situación fiscal, he tenido a bien expedir el siguiente

"DECRETO

"Artículo primero. Se otorga un estímulo fiscal a las entidades federativas y Municipios durante los ejercicios fiscales de 2003 a 2005, calculado con base a los ingresos a que hace referencia este decreto que obtenga la Federación por los pagos que cada entidad federativa o Municipio realice por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores en los términos de los artículos 113, 115, último párrafo y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a lo siguiente:

"I. En el ejercicio fiscal de 2003, el estímulo fiscal se constituirá con el 100% de los ingresos extraordinarios a que hace referencia este decreto que la entidad federativa o Municipio de que se trate pague a la Federación en dicho año y se distribuirá en los términos que se señalan a continuación:

"a) El 80% del pago que se haga a la Federación por los ingresos a que se refiere esta fracción, se aplicará a la entidad federativa o Municipio que efectúe el pago, y

"b) El 20% restante del pago que se haga a la Federación por los ingresos a que se refiere esta fracción se incluirá, tratándose de los pagos efectuados por las entidades federativas, en el fondo general de participaciones y, en el caso de los pagos realizados por los Municipios, se adicionará al fondo de fomento municipal.

"II. En el ejercicio fiscal de 2004, el estímulo fiscal se constituirá con el 80% de los ingresos a que hace referencia el presente decreto que la entidad federativa o Municipio de que se trate pague a la Federación en dicho año y se distribuirá en los términos que se señalan a continuación:

"a) El 60% del pago que se haga a la Federación por los ingresos a que se refiere esta fracción se aplicará a la entidad federativa o Municipio que efectúe el pago, y

"b) El 20% del pago que se haga a la Federación por los ingresos a que se refiere esta fracción se incluirá, tratándose de los pagos efectuados por las entidades federativas, en el fondo general de participaciones y, en el caso de los pagos realizados por los Municipios, se adicionará al fondo de fomento municipal.

"El 20% restante de los pagos que se hagan a la Federación por los ingresos a que se refiere este decreto, no formará parte del estímulo fiscal previsto en esta fracción y le corresponderá a la Federación.

"III. En el ejercicio fiscal de 2005, el estímulo fiscal se constituirá con el 60% de los ingresos a que hace referencia el presente decreto que la entidad federativa o Municipio de que se trate pague a la Federación en dicho año y se distribuirá en los términos que se señalan a continuación:

"a) El 40% del pago que se haga a la Federación por los ingresos a que se refiere esta fracción se aplicará a la entidad federativa o Municipio que efectúe el pago, y

"b) El 20% del pago que se haga a la Federación por los ingresos a que se refiere esta fracción se incluirá, tratándose de los pagos efectuados por las entidades federativas, en el fondo general de participaciones y, en el caso de los pagos realizados por los Municipios, se adicionará al fondo de fomento municipal.

"El 40% restante de los pagos que se hagan a la Federación por los ingresos a que se refiere este decreto, no formará parte del estímulo fiscal previsto en esta fracción y le corresponderá a la Federación.

"Artículo segundo. Para los efectos de lo dispuesto en el presente decreto, se consideran ingresos a los que se refiere el mismo, únicamente los siguientes:

"I. El impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores al servicio de la entidad federativa o Municipio de que se trate, incluyendo el crédito al salario absorbido por dicha entidad federativa o Municipio, según sea el caso, siempre que corresponda a los ingresos señalados en el capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, percibidos por sus trabajadores con anterioridad al 1o. de noviembre de 2002, incluidos los accesorios que, en su caso, se deban pagar.

"II. El monto del incremento en los pagos realizados por la entidad federativa o Municipio de que se trate, por concepto de retenciones sobre los ingresos señalados en el capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo, en su caso, el monto a que se refiere el último párrafo del artículo 115 de dicha ley, de conformidad con lo siguiente:

"a) Se obtendrá el impuesto sobre la renta efectivamente enterado por concepto del capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta de la entidad federativa o Municipio de que se trate, por la nómina correspondiente al mes de octubre de 2002, por todos sus trabajadores en dicho mes, adicionándolo con el impuesto que corresponda a la parte proporcional del aguinaldo, prima vacacional y demás conceptos monetarios.

"b) Se determinará el impuesto sobre la renta sobre dicha nómina considerando el aumento que tendría la misma de incrementar los salarios en la cantidad necesaria para que el ingreso neto de los trabajadores permanezca constante.

"c) El monto en que exceda el impuesto sobre la renta conforme al inciso anterior con respecto al inciso a), será el que se tome en cuenta para definir los ingresos de los próximos meses y hasta el 31 de diciembre de 2005.

"Para los efectos del cálculo a que hace referencia la fracción II de este artículo, no se considerarán ingresos los derivados de los aumentos o disminuciones de personal ni por los aumentos de salarios, que se realicen con posterioridad al 1o. de noviembre de 2002.

"Artículo tercero. Para los efectos del estímulo fiscal que le corresponda a las entidades federativas o Municipios en los términos de lo dispuesto en el presente decreto, se podrán aplicar los mecanismos de compensación tanto para pagos por autocorrección fiscal como para pagos espontáneos, incluidos, en su caso, sus accesorios, que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Artículo cuarto. Las entidades federativas y Municipios, deberán obtener autorización del Servicio de Administración Tributaria para poder gozar del estímulo fiscal a que se refiere este decreto. Para tales efectos, deberán presentar a más tardar el 1o. de agosto de 2003 la solicitud de autorización, en la que determinarán el monto de los ingresos por los que optarán tomar el estímulo fiscal.

"El estímulo fiscal a que se refiere este decreto no podrá tomarse por aquellos ingresos cuyo monto no se determine en la solicitud que presente la entidad federativa o Municipio.

"El incumplimiento de las obligaciones fiscales de carácter federal a cargo de la entidad federativa o Municipio, ya sea por adeudo propio o por retenciones a terceros, será motivo de inaplicación del estímulo fiscal previsto en este decreto a la entidad federativa o Municipio que incurra en dicho incumplimiento.

"Artículo quinto. Las entidades federativas podrán efectuar las gestiones que sean necesarias para los efectos del presente decreto por cuenta de sus Municipios y organismos.

"Artículo sexto. Para los efectos de este decreto, se entiende por trabajadores de las entidades federativas a los de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de sus organismos descentralizados. Tratándose de Municipios, también se considerarán los de sus organismos.

"Artículo séptimo. Durante los ejercicios fiscales de 2003 a 2005, los ingresos a que hace referencia el presente decreto, no formarán parte de la recaudación federal participable a que hace referencia la Ley de Coordinación Fiscal.

"Artículo octavo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.

"Artículo noveno. La aplicación de los beneficios establecidos en el presente decreto no dará lugar a devolución alguna.

"TRANSITORIO

"Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil tres.—Vicente Fox Quesada.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.—Rúbrica."

2) "*Decreto por el que se exime del pago de contribuciones federales, se condonan recargos de créditos fiscales y se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas, a los contribuyentes que se indican*", publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles veintitrés de abril de dos mil tres, en lo que interesa, dice:

"Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

"CONSIDERANDO

"...

"Que derivado de la problemática que enfrentan las entidades federativas en el pago del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, el Ejecutivo Federal emitió un decreto que otorga estímulos fiscales en el citado impuesto, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2003. Sin embargo, con el objeto de seguir avanzando en el fortalecimiento de las haciendas locales, resulta necesario precisar el decreto de referencia para aclarar algunos conceptos que forman parte del cálculo del estímulo fiscal;

"...

"Que con el fin de alcanzar los objetivos antes planteados, he tenido a bien expedir el siguiente

"DECRETO

"...

"Artículo sexto. Se reforma el artículo segundo, fracción I y se adicionan los artículos tercero, recorriéndose en su orden los actuales artículos tercero al noveno para ser cuarto al décimo y décimo primero, del Decreto por el que se otorgan a las entidades federativas los estímulos fiscales que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2003, para quedar como sigue:

"Artículo segundo.

"I. El impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores al servicio de la entidad federativa o Municipio de que se trate, incluyendo el crédito al salario absorbido por dicha entidad federativa o Municipio, según sea el caso, siempre que corresponda a los ingresos señalados en el capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, percibidos por sus trabajadores con anterioridad al 1o. de noviembre de 2002, incluidos los accesorios que, en su caso, se deban pagar, así como, en su caso, el impuesto sustitutivo del crédito al salario a cargo de la entidad federativa o Municipio.

"Artículo tercero. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo primero de este decreto, el monto del incremento por los pagos realizados por la entidad federativa o Municipio de que se trate, en los términos del artículo segundo del mismo, se distribuirá conforme a lo siguiente:

"I. En el ejercicio fiscal de 2003, el 100% del pago adicional que se haga al fisco federal por los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo primero de este decreto, correspondiente a los trabajadores docentes o de salud, incluyendo al personal federalizado a que se refieren los acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica y para la descentralización de los servicios de salud, cuyos salarios sean cubiertos por la entidad federativa o, en su caso, por el Municipio, por cuenta propia o de la Federación, se aplicará a quien realice los pagos.

"II. En el ejercicio fiscal de 2004, el 80% del pago adicional que se haga al fisco federal por los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo primero de este decreto, correspondiente a los trabajadores docentes o de salud, incluyendo al personal federalizado, a que se refieren los acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica y para la descentralización de los servicios de salud, cuyos salarios sean cubiertos por la entidad federativa o, en su caso, por el Municipio, por cuenta propia o de la Federación, se aplicará a quien realice los pagos.

"Del 20% restante del pago que se haga al fisco federal por los ingresos a que se refiere esta fracción, la mitad se incluirá, tratándose de los pagos efec-

tuados por las entidades federativas, en el fondo general de participaciones y, en el caso de los pagos realizados por los Municipios, se adicionará al fondo de fomento municipal y la otra mitad le corresponderá a la Federación.

"III. En el ejercicio fiscal de 2005, el 60% del pago adicional que se haga al fisco federal por los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo primero de este decreto, correspondiente a los trabajadores docentes o de salud, incluyendo al personal federalizado, a que se refieren los acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica y para la descentralización de los servicios de salud, cuyos salarios sean cubiertos por la entidad federativa o, en su caso, por el Municipio, por cuenta propia o de la Federación, se aplicará a quien realice los pagos.

"Del 40% restante del pago que se haga al fisco federal por los ingresos a que se refiere este artículo, la mitad se incluirá, tratándose de los pagos efectuados por las entidades federativas, en el fondo general de participaciones y, en el caso de los pagos realizados por los Municipios, se adicionará al fondo de fomento municipal y la otra mitad le corresponderá a la Federación.

"Lo dispuesto en este artículo, también será aplicable tratándose de trabajadores docentes o de salud, incluyendo al personal federalizado a que se refieren los acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica y para la descentralización de los servicios de salud, cuyos salarios sean cubiertos por un organismo descentralizado de una entidad federativa o de un Municipio, por cuenta propia, de la entidad federativa, del Municipio o de la Federación. En este caso, el beneficio establecido se aplicará a quien realice los pagos.

"Artículo décimo primero. Los beneficios previstos en el presente decreto no serán aplicables para las entidades federativas, los Municipios, o los organismos descentralizados de éstos, que hayan interpuesto algún medio de defensa en contra de los adeudos a que se refiere el mismo, excepto cuando se desistan de dichos medios de defensa o cuando los adeudos hubiesen quedado firmes por una resolución o sentencia definitiva, a más tardar el 30 de junio de 2003.

"Cuando las entidades federativas, los Municipios, o los organismos descentralizados de éstos, apliquen los beneficios a que se refiere este decreto y posteriormente a su aplicación se interponga algún medio de defensa en contra de los adeudos por los cuales se tomaron dichos beneficios, éstos quedarán sin efectos.

"...

"Artículo décimo segundo. La aplicación de los beneficios establecidos en el presente decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna, a excepción de lo dispuesto por los artículos segundo, tercero, cuarto y noveno del mismo.

"Artículo décimo tercero. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.

"TRANSITORIOS

"Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"...

"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del mes de abril de dos mil tres.—Vicente Fox Quesada.—Rúbrica.—El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.—Rúbrica."

3) "*Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales*", publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles veintiséis de enero de dos mil cinco, en lo que interesa, dice:

"Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

"CONSIDERANDO

"...

"Que es indispensable ampliar hasta el año de 2006 los beneficios establecidos en el decreto por el que se otorgan a las entidades federativas los estímulos fiscales que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2003, toda vez que es necesario continuar apoyando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las entidades citadas y de sus

Municipios, así como la transparencia en la aplicación que lleven a cabo de los recursos públicos;

"...

"DECRETO

"...

"Artículo quinto. Se reforman los artículos primero, primer párrafo y fracciones II y III; segundo, fracción II, inciso c); tercero, fracciones II y III, y octavo; y se adicionan los artículos primero, con una fracción IV; tercero, con una fracción IV y décimo segundo, del decreto por el que se otorgan a las entidades federativas los estímulos fiscales que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2003, y reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2003, para quedar como sigue:

"Artículo primero. Se otorga un estímulo fiscal a las entidades federativas y Municipios durante los ejercicios fiscales de 2003 a 2006, calculado con base a los ingresos a que hace referencia este decreto que obtenga la Federación por los pagos que cada entidad federativa o Municipio realice por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores en los términos del capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a lo siguiente:

"I. ...

"II. En el ejercicio fiscal de 2004, el estímulo fiscal se constituirá con el 80% de los ingresos a que hace referencia el presente decreto que la entidad federativa o Municipio de que se trate pague a la Federación.

"Los pagos correspondientes al ejercicio fiscal de 2004 se podrán hacer mensualmente, por partes iguales, durante el año de 2005.

"III. En el ejercicio fiscal de 2005, el estímulo fiscal se constituirá con el 60% de los ingresos a que hace referencia el presente decreto que la entidad federativa o Municipio de que se trate pague a la Federación en dicho ejercicio.

"IV. En el ejercicio fiscal de 2006, el estímulo fiscal se constituirá con el 20% de los ingresos a que hace referencia el presente decreto que la entidad federativa o Municipio de que se trate pague a la Federación en dicho ejercicio.

"Artículo segundo. …

"I. …

"II. …

"a) y b) …

"c) El monto en que exceda el impuesto sobre la renta conforme al inciso anterior con respecto al inciso a), será el que se tome en cuenta para definir los ingresos de los próximos meses y hasta el 31 de diciembre de 2006.

"…

"Artículo tercero. …

"I. …

"II. En el ejercicio fiscal de 2004, el 100% del pago adicional que se haga al fisco federal por los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo primero de este decreto, correspondiente a los trabajadores docentes o de salud, incluyendo al personal federalizado, a que se refieren los acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica y para la descentralización de los servicios de salud, cuyos salarios sean cubiertos por la entidad federativa o, en su caso, por el Municipio, por cuenta propia o de la Federación, se aplicará a quien realice los pagos.

"III. En el ejercicio fiscal de 2005, el 80% del pago adicional que se haga al fisco federal por los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo primero de este decreto, correspondiente a los trabajadores docentes o de salud, incluyendo al personal federalizado, a que se refieren los acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica y para la descentralización de los servicios de salud, cuyos salarios sean cubiertos por la entidad federativa o, en su caso, por el Municipio, por cuenta propia o de la Federación, se aplicará a quien realice los pagos.

"IV. En el ejercicio fiscal de 2006, el 60% del pago adicional que se haga al fisco federal por los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo primero de este decreto, correspondiente a los trabajadores docentes o de salud, incluyendo al personal federalizado, a que se refieren los acuerdos nacionales para la modernización de la educación básica y para la descentralización de los servicios de salud, cuyos salarios sean cubiertos por la entidad federa-

tiva o, en su caso, por el Municipio, por cuenta propia o de la Federación, se aplicará a quien realice los pagos.

"...

"Artículo octavo. Los ingresos que efectivamente obtenga la Federación a partir de 2005, en los términos de este decreto, y que no constituyen parte del estímulo fiscal establecido en el mismo, formarán parte de la recaudación federal participable a que hace referencia la Ley de Coordinación Fiscal.

"Artículo décimo segundo. Los beneficios que establece el presente decreto que sean aplicables a partir del año 2005, podrán tomarse siempre que los beneficiarios celebren con el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un convenio que garantice, entre otras materias, el cumplimiento de diversas obligaciones y la transparencia.

"...

"TRANSITORIO

"Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Los contribuyentes podrán aplicar para el ejercicio fiscal de 2004 lo dispuesto en el artículo décimo del presente decreto.

"...

"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil cinco.—Vicente Fox Quesada.—Rúbrica.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.—Rúbrica."

Como puede apreciarse, el objetivo manifestado para su expedición fue continuar avanzando en el fortalecimiento de las haciendas de las entidades federativas, a través de programas para mejorar la distribución racional de sus fuentes de ingresos, derivado de la problemática que enfrentan éstas en el pago de la retención del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, resultando necesario el establecimiento de un mecanismo que les permitiera corregir su situación, mediante la instrumentación de un esquema de estímulos fiscales, buscando con esto un importante alivio a las finanzas públicas de las entidades federativas y de los Municipios, al tiempo de permitir la no afectación de los salarios de sus trabajadores, logrando con esto que las

entidades federativas con disposición a regularizarse encontraran una solución definitiva a su situación fiscal.

En el Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, publicado el cinco de diciembre de dos mil ocho, y que ahora se reclama, se justificó la medida fiscal señalando:

"Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; segundo, fracción V del 'Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

"CONSIDERANDO

"Que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el fortalecimiento del federalismo fiscal constituye una de las principales estrategias trazadas por esta administración para sentar las bases de un crecimiento equilibrado que se traduzca en metas de desarrollo social que permitan alcanzar una mejor calidad de vida y combatir la pobreza y la marginación que existen en el país;

"Que como una medida tendiente a corregir la situación fiscal de las entidades federativas y los Municipios en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, en el artículo Segundo, fracción V del 'Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, el Congreso de la Unión estableció que el Ejecutivo Federal a mi cargo debe diseñar un programa para la regularización de adeudos que tengan con la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores; dicho programa debe incluir la regularización de los adeudos que tenga la Federación con los citados entes para lo cual se debe considerar un finiquito de adeudo entre los tres niveles de gobierno referidos;

"Que en cumplimiento de la disposición señalada y con el fin de lograr una solución definitiva e integral de la problemática en cuestión, se estima necesario otorgar diversos beneficios fiscales a las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, que permitan preservar el equilibrio de las finanzas públicas de esos órdenes de gobierno y generar incentivos para el futuro cumplimiento oportuno en el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores;

"Que por otro lado, con la finalidad de generar e inducir mayores inversiones en los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de la sociedad, la fracción II del artículo segundo del decreto antes mencionado, prevé que la Comisión Nacional del Agua podrá aplicar los pagos corrientes que, a partir de 2008, reciba de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, a la disminución de los adeudos históricos que registren tales conceptos al 31 de diciembre de 2007, siempre que las entidades federativas correspondientes contemplen en su legislación local el destino y afectación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el pago de dichos derechos y aprovechamientos, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, y

"Que con el objeto de lograr una regularización adecuada de los adeudos históricos a que se refiere el párrafo anterior, se considera conveniente otorgar un estímulo fiscal a aquellos que se acojan a lo señalado en el mencionado artículo segundo, fracción II, consistente en el acreditamiento de una cantidad equivalente al monto total de los accesorios y actualización correspondientes a los adeudos históricos de referencia que se causen a partir del 1 de enero de 2008 y hasta la fecha en que se terminen de disminuir dichos adeudos históricos mediante los pagos corrientes que se efectúen a partir de 2008 por derechos y aprovechamientos en materia de agua, contra el monto de los accesorios y actualización generados por el adeudo histórico en el mismo periodo, he tenido a bien expedir el siguiente

"DECRETO

"...

"Artículo segundo. Las entidades federativas y Municipios que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo tercero de este decreto gozarán de los beneficios fiscales siguientes: ..."

En las relatadas condiciones, se colige que el objetivo perseguido con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, que extendió el beneficio contemplado en el decreto reformado que impugna la quejosa, surgió para el fortalecimiento de las haciendas de las entidades federativas y de los Municipios, para mejorar la distribución racional de sus fuentes de ingresos, en relación al problema relacionado con el pago de la retención del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores (esto es, en su carácter de patrones retenedores), para corregir su situación fiscal, mediante la instrumentación de un esquema de estímulos fiscales, que aliviara sus finanzas públicas, al tiempo de permitir que no se afectaran los salarios de sus trabajadores.

Asimismo, esa medida sigue operando como una medida tendente a corregir la situación fiscal de las entidades federativas y los Municipios en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, derivado del artículo segundo, fracción V, del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil siete, donde el Congreso de la Unión estableció que el Ejecutivo Federal debía diseñar un programa para la regularización de adeudos que tuvieran con la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

El objetivo buscado fue incluir la regularización de los adeudos que tuviera la Federación con los citados entes; para lo cual, se debía considerar un finiquito de adeudo entre los tres niveles de gobierno referidos; por consiguiente, para lograr una solución definitiva e integral de la problemática en cuestión, se otorgaron diversos beneficios fiscales a las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo a sus organismos descentralizados, que permitieran preservar el equilibrio de las finanzas públicas de esos órdenes de gobierno y generar incentivos para el futuro cumplimiento oportuno en el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, lo que conlleva a desestimar lo argumentado por la recurrente, porque el motivo perseguido con la ley y decreto reclamados, que establece una distinción entre patrones retenedores que son entes públicos, y patrones retenedores que son particulares, sí tiene una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, que busca avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, como lo es el fortalecimiento de las haciendas de las entidades federativas,

Distrito Federal, Municipios y organismos descentralizados, mediante un estímulo fiscal que recae en su obligación de pagar o enterar a la Federación, el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

Esa afirmación encuentra sustento en lo establecido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. ..."

Igualmente es acorde con las previsiones legales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal que, en lo que interesa, dispone:

"Artículo 1o. Esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colabo-

ración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

"Cuando en esta ley se utilice la expresión 'entidades', ésta se referirá a los Estados y al Distrito Federal.

(Reformado, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen."

(Reformado, D.O.F. 15 de diciembre de 1995)

"Artículo 2o. El fondo general de participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

(Reformado, D.O.F. 3 de diciembre de 1993)

"La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. …

(Reformado, D.O.F. 28 de diciembre de 1989)

"El fondo general de participaciones se distribuirá conforme a lo siguiente:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 26 de diciembre de 1990)

"I. El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate …

(Reformada, D.O.F. 26 de diciembre de 1990)

"II. El 45.17%, en los términos del artículo 3o. de esta ley.

(Adicionada, D.O.F. 26 de diciembre de 1990)

"III. El 9.66% restante, se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada entidad, éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate. …"

Ahora bien, es preciso examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador, pues es indispensable que el establecimiento de una distinción entre gobernados, constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que se quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido.

De la lectura integral del decreto reformado se advierte que el presidente de la República otorgó un estímulo fiscal, el cual fue extendido en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, a las entidades federativas, Municipios, demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que se encontraran al corriente en los enteros correspondientes a diciembre de dos mil doce, aplicando diversos porcentajes hasta el ejercicio fiscal de dos mil catorce, respecto de los ingresos que le corresponde recibir a la Federación, por los pagos que dichos entes públicos debían y deben enterar por concepto de la retención del impuesto sobre la renta, a cargo de sus trabajadores.

Para tal efecto, se dispuso que previamente debían celebrar convenio con el Gobierno Federal, en el cual, la entidad federativa o el Municipio de que se trate manifestaran de forma expresa y con carácter irrevocable su consentimiento para que, conforme a lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales que les correspondieran pudieran utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados con la omisión total o parcial del entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, generados a partir del uno de enero de dos mil nueve.

Asimismo, se determinó que los organismos descentralizados sólo podían gozar de los beneficios fiscales cuando la entidad federativa o Municipio al que pertenecieran, manifestara su conformidad para que, en caso de que dichos organismos incumplieran con su obligación de entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, procediera a realizarse la compensación del adeudo contra las participaciones federales de la entidad federativa o Municipio.

Como puede advertirse, la medida tomada buscó corregir la situación fiscal de las entidades federativas y los Municipios en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores; por tanto, no puede argumentarse que las normas reclamadas no cumplen con la finalidad de fortalecer la hacienda pública, al no señalar cómo se distribuirán los beneficios que se obtengan al aplicar el estímulo, porque lo que se hizo fue diseñar un programa para la regularización de adeudos que los entes públicos tuvieran con la Federación, por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus tra-

bajadores, para considerar un finiquito de adeudo, dando con eso una solución definitiva e integral de la problemática en cuestión, preservando el equilibrio de las finanzas públicas de esos órdenes de gobierno y generando incentivos para el futuro cumplimiento oportuno en el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores; de tal manera que no puede sostenerse que hay beneficios por distribuir, sino que la medida tiende a que se liquiden todos los adeudos.

Para efectos de la aplicación del estímulo fiscal en comento, se prevén reglas precisas para calcular el monto de la retención adeudada a la Federación, por las entidades federativas y Municipios, así como el cálculo que deben realizar para los incrementos subsecuentes de ese adeudo, de conformidad con los convenios de coordinación fiscal celebrados entre dichos entes públicos y la Federación. Esas reglas precisas, como ya se había mencionado, de la lectura íntegra del decreto reformado reclamado se advierte que no afectan las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a favor de los trabajadores de esos entes públicos, únicamente son para calcular el adeudo a la Federación, por concepto del impuesto en comento de los Estados y Municipios en su carácter de patrones retenedores.

En esa tesitura, la medida (estímulo fiscal) establecida por el presidente de la República, para alcanzar el objetivo indicado, es racional para lograr fortalecer y aliviar las haciendas de las entidades federativas y Municipios, toda vez que constituye un medio apto para conducir al fin u objetivo que se quiso alcanzar, puesto que se instrumenta un sistema de porcentajes sobre las retenciones adeudadas a la Federación, para que cumpliendo previamente con los requisitos que fija el decreto, y estando al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de dos mil doce (*esto último aplica para el artículo 9o., párrafo cuarto, de la Ley de Ingresos de la Federación que se impugna*) se otorgue un estímulo fiscal para los ejercicios fiscales de dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, que se aplicará de manera mensual y se determinará para cada uno de los meses de dichos ejercicios aplicando el por ciento señalado en la tabla anexa al excedente que resulte de comparar el promedio mensual del total del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores efectivamente enterado, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil siete, y el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores que, efectivamente, corresponda enterar en el mes de que se trate, de los ejercicios fiscales de dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once, siempre que este último monto sea mayor. El resultado obtenido será el monto del estímulo que podrán acreditar en el pago del mes de que se trate, contra el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores que deban enterar en dicho mes.

Año	Estímulo %
2009	60
2010	30
2011	10

Y, en caso de que en alguno de los meses de los ejercicios fiscales de esos años no se haya aplicado el estímulo, se puede aplicar a cualquiera de los meses siguientes, siempre y cuando se trate del mismo ejercicio fiscal.

Esa disposición se extendió a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos que, precisamente, se hubieren adherido al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, publicado el cinco de diciembre de dos mil ocho, que se ha venido analizando, para que, en lugar de aplicar los porcentajes ahí establecidos, pudieran aplicar el 60% para dos mil trece y el 30% para dos mil catorce.

Por tanto, se trata de un medio o instrumento para lograr el objetivo fijado por el presidente de la República, lo que se estima racional e idóneo para lograr el fin pretendido, pues evidentemente se logra que los entes públicos mencionados, estén al corriente en sus adeudos con la Federación, por lo que sí se encuentra que guarda una relación racionalmente lógica de causa-efecto, entre los medios elegidos (estímulos fiscales) y el objetivo pretendido que fue lograr una solución definitiva e integral de la problemática en cuestión, para preservar el equilibrio de las finanzas públicas de esos órdenes de gobierno y generar incentivos para el futuro cumplimiento oportuno en el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

Aclarado ese aspecto, es innegable que el beneficio de que se trata resultaba necesario, por lo que no se considera que sea desmedido o que afecte bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

Al respecto, la recurrente esgrime que, al establecerse el estímulo fiscal, sólo se benefició a los patrones retenedores del impuesto sobre la renta, que a la vez son entidades federativas y Municipios, realizando una diferencia inconstitucional en cuanto a trato, con los patrones retenedores de ese impuesto, que tienen el carácter de particulares, afirmando que se debió incluir en ese beneficio a los demás patrones retenedores que, encontrándose en la

misma situación jurídica (patrones retenedores del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores), no tienen el carácter de entes públicos.

Se ha sostenido que la Constitución Federal consagra el derecho a que se otorgue un trato igual a los gobernados que se encuentren en igual situación y, por ende, desigual a aquellos que no se encuentren en las mismas circunstancias relevantes; empero, dicho principio no es el único que debe ser valorado en el sistema, siendo necesario proteger otros derechos que se encuentran en la Constitución Federal, para atender los fines sociales que corresponden al Estado constitucional democrático, los cuales no deben ser antagónicos a los de las libertades personales y patrimoniales, sino moderadores de ellas.

Sin embargo, debe tenerse presente que hay situaciones, como la que ahora se presenta, que ameritan una atención especial por parte de las autoridades. Si bien los patrones retenedores, como tales, se encuentran en la misma situación jurídica y, al respecto, la ley no distingue entre particulares y entes públicos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cierto es que el estímulo fiscal otorgado en la ley y decreto combatidos se expidieron con un objetivo determinado y bien definido, que es el fortalecer las haciendas de las entidades federativas y Municipios, para lograr la regularización de sus adeudos con la Federación considerando un finiquito de éstos para preservar el equilibrio de las finanzas públicas de esos órdenes de gobierno y generar incentivos para el futuro cumplimiento oportuno en el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

Es precisamente el objetivo que se persigue el que justifica el trato diferente que se otorga entre entes públicos y particulares, pues es correcto afirmar que tanto los particulares como los entes públicos se encuentran en un plano de igualdad frente a la ley, cuando se trata de que actúen como auxiliares de la administración pública, reteniendo el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores por la prestación de un trabajo personal subordinado; pero, por lo que respecta al entero de ese impuesto retenido a las autoridades fiscales correspondientes, en este caso, a la Federación, ya no son exactamente iguales ni se encuentran en el mismo plano, porque la obligación de los patrones retenedores particulares se rige únicamente por la Ley del Impuesto sobre la Renta, mientras que la obligación de los patrones retenedores que son entes públicos, está, además, regida por la Ley de Coordinación Fiscal, su reglamento, convenios entre la Federación y los Estados o los Municipios, entre otras disposiciones legales, porque conforman la administración pública y participan de las contribuciones recaudadas, según la distribución, forma y requi-

sitos que se establecen en dichos ordenamientos o convenios entre dichos entes públicos; en otras palabras, administran los gastos públicos a que se destinan las contribuciones.

Ésta es una diferencia fundamental que se tomó en cuenta en la ley y en el decreto reformado reclamados por la quejosa, para establecer el estímulo fiscal para las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, si se parte de que éstos desarrollan actividades de naturaleza distinta a las actividades que llevan a cabo los demás patrones retenedores particulares, pues el Estado Mexicano, en cuanto a su organización y estructura, establece tres esferas competenciales: la federal, la estatal y la municipal, estableciendo, en su artículo 115 de la Constitución Federal, el Municipio como la base de la división territorial y la organización política y administrativa de los Estados de la República.

Así, las entidades federativas y Municipios participan de los atributos propios del poder público, que se manifiesta en los actos de autoridad que realizan sus órganos de gobierno y están investidos de personalidad jurídica (son sujetos de derechos y obligaciones) con facultades de contar con una hacienda o patrimonio propio, de expedir sus propias normas legales dentro del ámbito de sus respectivas competencias, de administrar los recursos públicos y participar de los de la Federación que les corresponden, para atender las funciones y servicios que les encomienda la ley; además, respecto al ejercicio de sus facultades y los servicios públicos que están obligados a prestar, por regla general, se encuentran exentos del pago de contribuciones, en cuanto a dichas funciones públicas, las cuales realizan en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional y no con la finalidad de obtener una ventaja en provecho propio.

De esta forma, queda plenamente justificada la distinción que se combate, pues su objetivo, como se ha venido señalando, fue fortalecer el federalismo fiscal como una estrategia de la administración para sentar las bases de un crecimiento equilibrado que se tradujera en metas de desarrollo social para alcanzar una mejor calidad de vida y combatir la pobreza y la marginación existente en el país, corrigiendo la situación fiscal de las entidades federativas y de los Municipios, en relación con el entero del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, objetivo que tiene como fin sanear las haciendas de las entidades federativas y Municipios, para beneficiar a las comunidades que directamente contribuyen para el gasto público de éstas e indi-

rectamente a la sociedad en general, que de alguna manera también resiente el aumento o disminución de las finanzas públicas.

También se advierte que se tomaron como parámetro para el otorgamiento del estímulo fiscal reclamado, las cantidades que habiendo retenido esos entes públicos, con el carácter de patrones retenedores, debían entregar a la Federación, porque era precisamente en ese rubro en el que tenían adeudos, representando, evidentemente, una carga financiera pública dichos adeudos, por ende, los patrones retenedores particulares que están obligados a retener el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, y a enterarlo a la autoridad fiscal respectiva, no se encuentran en igualdad de circunstancias, respecto a los entes públicos beneficiarios del estímulo fiscal reclamado.

Cabe mencionar que el estímulo fiscal otorgado a las entidades federativas y Municipios, por los ejercicios fiscales de dos mil nueve a dos mil catorce, en todo caso, se refiere al impuesto retenido adeudado a la Federación, y la recurrente, en su carácter de patrón retenedor particular, no demostró que tuviera adeudos por ese concepto durante los ejercicios fiscales a que se refiere la ley y el decreto reformado reclamados.

En las relatadas condiciones se considera que el estímulo fiscal de que se trata, que no incluye a los patrones retenedores particulares, se encuentra plenamente justificado, por lo que la medida adoptada respeta el derecho de igualdad, por encontrarse dentro de los tratamientos que pueden considerarse proporcionales, ya que la situación de hecho que se toma en cuenta (adeudos por impuesto sobre la renta retenido y no enterado por las entidades federativas y Municipios), la finalidad de la ley y del decreto reclamados (sanear las haciendas públicas de dichos adeudos), sin advertirse que existan derechos constitucionales de gobernados afectados por tal medida, no se estima innecesaria o desmedida en proporción con otros derechos constitucionalmente protegidos.

Las consideraciones precedentes conducen a declarar infundados los argumentos de la recurrente en los que arguye violación al derecho de igualdad, pues el estímulo fiscal que reclamó no otorga un beneficio para los trabajadores de los entes públicos, del que excluye a los trabajadores de las personas particulares; no concede un beneficio a dichas entidades estrictamente en su carácter de patrones retenedores, excluyendo a las demás personas que también tienen esa calidad, sino que, tal como quedó demostrado, el beneficio que se concedió, lo fue en cuanto a la manera en que debían

cubrir sus adeudos, para fortalecer sus haciendas públicas en beneficio de todos los gobernados que han delegado su soberanía en el Estado, encargado de la administración de los recursos públicos, para solventar las necesidades colectivas y prestar los servicios que se le han encomendado, tanto en la Constitución Federal, como en la legislación ordinaria.

En términos semejantes se resolvió, por unanimidad de cinco votos, en la Primera Sala, bajo la ponencia del **Ministro Sergio A. Valls Hernández**, el amparo en revisión 657/2007.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia sujeta a revisión y negar la protección constitucional solicitada contra el párrafo cuarto del artículo 9o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en relación con la fracción II del artículo segundo del decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos, publicado el cinco de diciembre de dos mil ocho.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a las quejosas, en contra de los actos reclamados precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán y Ministro presidente Luis María Aguilar Morales. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y

18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis aislada 2a. CXXII/99 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 591.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.

El artículo citado establece que a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que se hubieran adherido al "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, y que estén al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012, se les extenderá hasta 2014 el beneficio fiscal consistente en acreditar sólo determinado porcentaje del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores. Esto es, el estímulo fiscal se otorga a las entidades públicas mencionadas, en su carácter de patrones retenedores, en relación con la obligación formal de retener y enterar el impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores, sin que se altere ni modifique el impuesto, sino únicamente los ingresos que se deben enterar al fisco. En consecuencia, al beneficio fiscal contenido en el artículo 9o., último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, no le son aplicables los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el estímulo no incide en los elementos de la contribución.

2a./J. 26/2015 (10a.)

Amparo en revisión 256/2014. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita

Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Amparo en revisión 646/2014. 28 de enero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Amparo en revisión 487/2014. 28 de enero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo en revisión 718/2014. Refrescos Victoria del Centro, S.A.P.I. de C.V. y otras. 11 de febrero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo en revisión 743/2014. Compañía Hotelera del Puerto de Loreto, S.A. de C.V. y otras. 11 de marzo de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.

Tesis de jurisprudencia 26/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD. El artículo citado establece que a las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados y autónomos, que se hubieran adherido al "Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de impuesto sobre la renta, de derechos y aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, y que estén al corriente en los enteros correspondientes al mes de diciembre de 2012, se les extenderá hasta 2014 el beneficio fiscal consistente en acreditar sólo determinado porcentaje del impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores. Ahora bien, el objetivo perseguido con la extensión del beneficio fue continuar con el fortalecimiento de las haciendas de las entidades federativas y de los Municipios

para mejorar la distribución racional de sus fuentes de ingresos, con relación al problema relativo al pago de la retención del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores (esto es, en su carácter de patrones retenedores), para corregir su situación fiscal, mediante la instrumentación de un esquema de estímulos fiscales que aliviara sus finanzas públicas, al tiempo de permitir que no se afectaran los salarios de sus trabajadores. Por tanto, el artículo 9o., último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, que introduce en el referido estímulo fiscal la distinción entre los entes públicos retenedores y los patrones particulares retenedores, no transgrede el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tener una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, además de constituir una medida apta para lograr el fin perseguido, por lo que resultaba necesaria y, por tanto, no hay afectación desmedida a bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

2a./J. 27/2015 (10a.)

Amparo en revisión 256/2014. 13 de agosto de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Amparo en revisión 646/2014. 28 de enero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Amparo en revisión 487/2014. 28 de enero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo en revisión 718/2014. Refrescos Victoria del Centro, S.A.P.I. de C.V. y otras. 11 de febrero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Amparo en revisión 743/2014. Compañía Hotelera del Puerto de Loreto, S.A. de C.V. y otras. 11 de marzo de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.

Tesis de jurisprudencia 27/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Subsección 2.
POR CONTRADICCIÓN DE TESIS

CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 4 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios provenientes de Tribunales Colegiados de distintos circuitos sobre asuntos de la materia de trabajo.[1]

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de

[1] De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero del Acuerdo General Número 5/2013, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el cual sustentó uno de los criterios denunciados como opositores.

TERCERO.—**Antecedentes y criterios contendientes.** Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito AD. 590/2013

1. ********** demandó del ********** y de la Secretaría de la Función Pública diversas prestaciones por despido injustificado, el cual se radicó con el número de juicio laboral ********** en la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el que se resolvió mediante un primer laudo en el que se absolvió a la parte demandada.

2. El trabajador actor promovió el juicio de amparo directo ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien, en ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil ocho, concedió la protección constitucional.

3. En cumplimiento del amparo, la Junta responsable emitió el laudo de catorce de abril de dos mil ocho, donde condenó a la reinstalación del actor, así como al pago de salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo durante el tiempo que estuvo interrumpida la relación de trabajo.

4. En contra de dicho laudo, la demandada promovió juicio de amparo directo que se radicó con el número ********** en el referido Tribunal Colegiado de Circuito, quien negó la protección constitucional en ejecutoria de ocho de octubre de dos mil ocho.

5. La Secretaría de la Función Pública promovió incidente de insumisión al laudo, el cual fue resuelto por interlocutoria de catorce de abril de dos mil nueve, en el sentido de declarar terminada la relación de trabajo entre las partes y cuantificar las prestaciones laudadas en $**********, que corresponden a tres meses de salarios, prima de antigüedad, veinte días de salario por cada año de servicios y salarios caídos por el periodo del dieciséis de marzo de dos mil dos al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, sin perjuicio de los salarios que continuaran acumulándose con posterioridad a la última fecha y las diferencias que pudieran existir derivado de la variación en el monto que sirvió de base para calcular tal indemnización. Tampoco se incluyó

en este cálculo el importe ya recibido por el actor por concepto de "subsistencia", que se fijó a la demandada con motivo del juicio de garantías **********.

6. Tanto el actor como ambas demandadas promovieron sendos juicios de amparo indirecto en contra de la mencionada interlocutoria, los cuales se radicaron con los números **********, ********** y ********** (acumulados) en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco.

7. Por acuerdo de siete agosto de dos mil nueve, dada la comparecencia de las partes para celebrar convenio de cumplimiento de laudo, la Junta laboral determinó tener "por celebrado el convenio de cumplimiento de laudo en términos de lo establecido por el numeral 945 de la Ley Federal del Trabajo al tenor de las cláusulas que quedaron descritas ... Y como lo solicitan las partes, al carecer de materia el presente asunto se ordena archivar el mismo como asunto total y definitivamente concluido".

En la cláusula segunda del convenio se pactó lo siguiente:

"Segunda.

"El trabajador actor manifiesta que como ya había quedado establecido, la Secretaría de la Función Pública se negó a reinstalar al actor y solicitó se diera por terminada la relación de trabajo, con lo que estuvo conforme el C. **********, previo pago de las indemnizaciones correspondientes. Encontrándose sub júdice la cuantificación de la condena contenida en el laudo incidental de fecha 14 de abril de 2009.

"Por lo que manifiesta el actor que habiendo recibido con anterioridad por parte de la demandada diversa cantidad en cumplimiento del laudo dictado por esta H. Junta Especial de fecha 14 de abril de 2008 y laudo incidental de 14 de abril de 2009, las partes han cuantificado de común acuerdo las prestaciones que corresponden al actor y ascienden a la cantidad de $********** libres de impuestos ..."

8. Por auto de once de agosto de dos mil nueve, el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en los juicios de amparo **********, ********** y ********** (acumulados), dado que consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, en virtud del acuerdo de la Junta referido en el punto que antecede. Al respecto, el juzgador de amparo consideró que de las constancias remitidas por la responsable se advierte que se pagaron a satisfacción del actor en el juicio natural, las prestaciones que reclamó, por lo que al haberse

cubierto la totalidad de las prestaciones y acciones reclamadas en el citado juicio y haberse dado por concluido y ordenado su archivo, cambió la situación jurídica.

9. El seis de agosto de dos mil diez, ********** promovió nuevo juicio laboral en contra del organismo ********** y de la Secretaría de la Función Pública, en el que reclamó la nulidad del convenio celebrado con las demandadas dentro del juicio laboral ********** que se tramitó en la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y como consecuencia, también solicitó el pago de las diferencias por diversas prestaciones hasta el cabal cumplimiento del laudo dictado en el referido juicio laboral, así como los intereses que se hubieran generado por su incumplimiento. El asunto se radicó con el número de juicio laboral **********, ante la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

En los hechos de la demanda, el actor refirió que el convenio es nulo, con base en lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Alegó que en él existe renuncia de derechos, porque recibió una cantidad inferior a la que se había cuantificado en el incidente de no acatamiento de laudo. En ampliación de demanda, precisó que la diferencia ascendía a $**********, dado que la demandada no le había pagado la totalidad de las prestaciones reclamadas. Refirió que era falso que haya recibido con anterioridad a la ratificación del citado convenio diversa cantidad en cumplimiento del laudo, pues la única cantidad que se le pagó fue la de $**********.

10. En su contestación, las demandadas alegaron que la interlocutoria de catorce de abril de dos mil nueve no se encontraba firme aun cuando se celebró el convenio, ya que promovieron en su contra juicio de amparo indirecto. Por tanto, las partes de común acuerdo decidieron cuantificar las prestaciones del laudo, con lo que se dio cumplimiento cabal a éste, resultando que el actor no tenía un derecho adquirido a recibir la cuantificación de la interlocutoria que había sido reclamada en el amparo, sino únicamente una posibilidad. Como excepción de pago, hicieron valer que se entregó la cantidad pactada en el convenio mediante cheque que recibió el propio demandante.

11. El veinticinco de abril de dos mil trece, la Junta laboral dictó laudo en el que declaró válido el convenio suscrito el siete de agosto de dos mil nueve. Consideró que de las cláusulas del referido convenio se advierte que el actor es profesionista de la carrera de "abogado", por lo que tiene conocimientos en la materia, y que compareció por voluntad propia ante la autoridad laboral, sin coacción alguna que forzara su intención, manifestando haber recibido con anticipación al convenio una diversa cantidad en cumplimiento del laudo de catorce de abril de dos mil ocho adicional a la de $********** que se le entregó al momento de celebrarlo. Asimismo, la Junta desestimó que

en ese caso sea aplicable el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, dado que es un convenio celebrado entre las partes en el juicio, donde se estableció una litis, por lo que una vez aprobado no se puede argumentar el desconocimiento de las condiciones reales de trabajo y de los beneficios a que se considera tener derecho.

12. El veintitrés de mayo de dos mil trece, la parte actora presentó demanda de amparo directo, que se radicó con el número de toca 590/2013 en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien por ejecutoria de seis de marzo de dos mil catorce, concedió la protección constitucional, con base en las siguientes consideraciones:

"A. Acción de nulidad de convenio, constituye una petición de principio dar por válido lo que está a discusión (pacto), siendo incorrecto ese obstáculo pretendido por la Junta. En principio cabe referir que la acción de nulidad planteada por la parte trabajadora en el expediente laboral **********, está relacionada con el convenio mediante el cual dieron por cumplido el pago de prestaciones materia del laudo emitido en el anterior juicio obrero **********, contra la Secretaría de la Función Pública, antes Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en materia de reinstalación del trabajador, aquí tercero perjudicado, y demás prestaciones a que igualmente se condenó. Lo anterior a su vez fue objeto de la interlocutoria de negativa de acatar el laudo en el tema de reinstalación (mediante indemnización señalada al efecto) y liquidación de prestaciones, emitida a su vez el catorce de abril de dos mil nueve. La cantidad cuantificada en aquella determinación y que se indicó debía pagarse a la parte actora fue por $********** por las prestaciones laudadas.

"Respecto de lo cual interesa que el auto de siete de agosto de dos mil nueve, dictado en aquel juicio primigenio **********, en que comparecieron el actor, asistido de su apoderado y los representantes de la demandada ********** así como la Secretaría de la Función Pública tercero interesada para celebrar un convenio sobre cumplimiento de laudo, porque entre otras cuestiones acordaron mutuamente que la cantidad a cubrir al accionante obrero ascendía a $********** (previo descuento de impuestos señalados al efecto) y donde se dio por recibido el actor como cumplimiento del anotado laudo e interlocutoria, aunado a que fue ordenado el archivo del asunto.

"Ahora bien, en opinión de la parte actora el citado convenio podía ser declarado nulo porque contenía renuncia de derechos a los que no podía abdicar, en particular, las prestaciones que fueron materia de condena a través de un laudo y su respectiva liquidación, efectuados por la Junta. En virtud de la ampliación de demanda, quedó expresado que el vicio atribuido al convenio celebrado había sido que era falso lo concerniente a que se le hubiera

cubierto a la parte actora alguna cantidad o cantidades distintas y en forma anterior, a la que fue materia de entrega al celebrar el referido convenio, cuestión que refirió que demostraría durante el juicio laboral. En torno a lo cual, el apoyo sustancial de la demanda fue el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo que señala:

"…

"Así, tomando en cuenta que el objeto o materia de la acción de nulidad deducida en el juicio laboral posterior **********, era el referido acuerdo de voluntades sobre la forma en que se tuvo por cumplido el laudo dictado en el juicio **********, sancionado ante la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a ésta le correspondía resolver si estaba demostrado el vicio de validez atribuido por la parte actora y, en su caso, si había ocurrido o no la renuncia de derechos laborales sobre las prestaciones laudadas.

"Ahora bien, las acciones de nulidad de convenio o liquidación están orientadas a que el operario puede alegar en el juicio laboral donde se deduce tal tipo de acción la invalidez de aquel pacto, convenio o liquidación, en que estime ocurrió la renuncia de derechos a que hace referencia el diverso numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo, en congruencia con el inciso h), de la fracción XXVII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, inclusive sin que sea obstáculo que el convenio haya sido ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a la jurisprudencia 2a./J. 1/2010 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que refiere:

"'TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.'

"De la jurisprudencia anterior, resulta relevante para el caso analizado, los siguientes aspectos:

"a) La terminación de una relación laboral por mutuo consentimiento, del que pueda derivar un convenio, ratificado o no por las partes, no es impedimento para verificar la renuncia de derechos laborales que contenga el pacto relativo, porque la autonomía de la voluntad de las partes tiene límites; en materia laboral, de acuerdo con la Constitución y legislación obrera.

"b) La celebración del convenio relativo por el trabajador no implica renunciar a los derechos o prestaciones devengados o que propiamente deri-

ven de los servicios prestados, así como los que, en su caso, se hayan pactado en el contrato individual o colectivo para el caso de terminación de la relación laboral.

"c) De ahí que entre los derechos laborales irrenunciables se ubican tanto los que derivan de la ley, o bien, los beneficios contractuales individuales o colectivos aplicables, porque se trata de derechos laborales que rigen la relación del obrero y su empleador.

"Derivado de lo anterior, si en el caso particular la parte actora, ejerció directa y expresamente la acción de nulidad de convenio, entonces en esa medida el problema jurídico planteado es si había existido o no la renuncia de derechos laborales que pretendió invocar, específicamente, según la ampliación de demanda, lo referente a que era incorrecto que previo a la celebración del convenio cuya nulidad demandaba, se le hubiera cubierto alguna cantidad o cantidades, en torno a las prestaciones laudadas en el juicio laboral primigenio.

"Así que independientemente de que tal convenio haya sido ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, o bien, que haya mediado mutuo consentimiento de la parte obrera para la celebración de aquél, tales circunstancias no implican una limitante para demandar la nulidad de convenio y, en su caso, analizar las causas de invalidez atribuidas, así como los hechos debatidos al respecto, según el material probatorio aportado y, en su caso, si existen o no diferencias a favor de la parte trabajadora.

"Lo que es así, porque en materia de trabajo, el principio de supremacía de la voluntad de las partes celebrantes de un convenio no impacta con la misma fuerza jurídica y alcances que ocurre en materia civil. En derecho laboral el órgano jurisdiccional debe, ante todo, tener presente sus atribuciones y obligaciones para pronunciarse sobre la posible renuncia de derechos laborales, no obstante que exista un convenio de por medio.

"Así que no por el hecho de que exista un convenio como el de referencia, en que otras situaciones, aparezca una cláusula donde la parte trabajadora acepte haber sido liquidada en parte de las prestaciones laudadas y, que solamente le resta recibir la cantidad que se precisa en el convenio ratificado ante la Junta, así como que no se reserva acción contra su empleador, según lo indicado en la jurisprudencia vigente del Alto Tribunal, no es obstáculo para que el afectado controvierta los vicios de tal liquidación consensada, ya que ese pacto no es cosa juzgada, como se reconoce en el criterio jurisprudencial citado, pues tratándose de la materia laboral alude generalmente a prestaciones que son producto del trabajo del empleado en el tiempo que

estuvo a disposición de la patronal y de prestaciones que reconoce a su favor la ley o beneficios producto de convenios (individual o colectivo) de trabajo, que son aspectos de orden público.

"De manera que en la medida que todavía no exista un pronunciamiento jurisdiccional de un tribunal del trabajo sobre si lo pactado hace nugatorio los derechos laborales de orden irrenunciable, subsiste el derecho del trabajador para demandar la invalidez del convenio o pacto liquidatorio efectuado con la contraparte patronal.

"Por ende, sería inadecuado asumir que no puede analizarse ese estudio de la acción por el hecho de haberse aceptado el monto de convenio, si justamente lo primero que tiene que hacer la autoridad del conocimiento para verificar si hay renuncia de derechos laborales en tal sentido, es si existen las incorrecciones o vicios atribuidos, de las que se hace depender la invalidez, para que en caso afirmativo, defina ulteriormente si procede o no la nulidad parcial o total de lo estipulado en convenio, según hubiere implicado una renuncia de derechos laborales y hasta dónde. En torno a lo cual corresponde a la Junta dirimir si hubo contravención al numeral 33 de la legislación laboral citada y el inciso h), de la fracción XXVII, del apartado 'A' del artículo 123 de la Constitución Federal.

"Ello, porque la celebración del convenio y pacto de cláusulas sobre aceptación de monto de pago de prestaciones, no significa per se, que los trabajadores carezcan de acción para exigir su invalidez, sin perjuicio de que el órgano de jurisdicción laboral verifique si efectivamente se satisfacen los presupuestos de la acción. Máxime que la acción de nulidad de disposiciones como el precepto 33 de la Ley Federal del Trabajo, tienen como objeto proteger a los trabajadores contra la celebración de convenios perjudiciales y lesivos a sus intereses, porque pretende evitar que renuncien a sus derechos en beneficio del patrono.

"En este sentido, es orientadora la jurisprudencia 123 de la otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal, referente a la Quinta Época, que señala:

"'CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO.'

"En este sentido, cuando la Junta del conocimiento aprueba un convenio, no está resolviendo como órgano jurisdiccional las cuestiones sometidas a su conocimiento en arbitraje, sino se limita a aprobar un acuerdo de voluntades de las partes, y, en esa virtud, no decide sobre las acciones y derechos que le fueron planteados en la demanda, sino se concreta a aprobar el pacto

elaborado por las partes, elevándolo a la categoría de laudo cuando aún no se ha dictado éste, o bien, como forma de dar por cumplido lo laudado.

"Por otra parte, no pasa inadvertido que la secretaría inconforme hubiere señalado que no se está en el caso de un convenio a través del cual hubiere concluido el juicio laboral, porque ya existía laudo y posteriormente lo que ocurrió fue que se tuvo por cumplido.

"Sin embargo, lo que desatiende es la forma en que la Junta Federal responsable tuvo por cumplido aquel laudo condenatorio dictado en el juicio **********. Es decir, no fue el cumplimiento ordinario del laudo en el sentido de cubrir la cantidad que al efecto había sido liquidada en interlocutoria de catorce de abril de dos mil nueve, o bien, mediante ejecución forzosa, sino fueron las partes quienes consensaron sobre tal condena y lo hicieron en un monto específico, acudiendo ante la Junta Federal que decidió aquella controversia, para indicar el acuerdo al que habían llegado, mencionando la cantidad con la cual tendrían por cumplidas las prestaciones como fue por $********** y que la parte actora se daba por recibida de tal cantidad, así como que previamente le había sido entregada diversa cantidad o cantidades, por las que se daba por pagada totalmente de las prestaciones laudadas.

"Así que sin estar por el momento a discusión si fue adecuado o no dicho pacto, lo cierto es que la parte trabajadora acudió en un ulterior juicio laboral a ejercer la acción de nulidad contra lo acordado en el expediente **********, invocando vicios o renuncia de derechos al respecto. De ahí que desde el plano de cuál fue la acción planteada en el juicio laboral posterior, queda claro que fue la nulidad de un convenio o pacto para dar por pagadas las prestaciones materia de condena del juicio laboral primigenio.

"Consecuentemente, la acción planteada no puede depender de la terminología utilizada para hacer referencia a dicho acuerdo de voluntades, pues lo trascendente no es cómo se citó, sino cuál sería la razón o justificación para que no debiera aplicar la misma solución jurídica en casos como el señalado, a la que deriva de la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal referida.

"Asimismo, no se aprecia cuáles serían los motivos para no aplicar similar solución jurídica a la expresada en tales precedentes del Alto Tribunal, en casos en que el pacto cuya nulidad se pretenda, sea en materia de las prestaciones laudadas en un juicio anterior, es decir, cuando se impugna la validez del acuerdo formulado para dar por cumplimentado un laudo dictado por una Junta Federal, pues finalmente lo que interesa es que ese órgano de

justicia laboral desplegó su jurisdicción tanto para resolver la controversia primigenia, como para ver por la condena impuesta y también para sancionar o aprobar el pacto formulado por las partes sobre la cantidad a cubrir para dar por cubiertas las prestaciones laudadas.

"Esto es, al margen de que no se trate de un convenio elevado a la categoría de laudo porque éste ya se había dictado en el juicio **********, la cuestión es que tampoco se explica por qué no sería compatible la misma solución jurídica al caso de referencia, ante la semejanza existente en relación a que el pacto o acuerdo que se alega nulo, en el segundo juicio **********, trata de aquel que surgió a la vida jurídica por la aprobación de la Junta Federal, para tener por satisfechas las prestaciones materia de condena en el asunto previo, en que dedujo un interés el actor y la Secretaría de la Función Pública, así como **********.

"Aquí es donde guarda trascendencia que: a) el juicio primigenio ya está concluido y archivado; b) existió un laudo condenatorio en aquel asunto cuyas prestaciones materia condena fueron objeto de pacto, en la etapa de ejecución de laudo, como lo refiere la secretaría; c) el respectivo acuerdo lo aprobó una Junta Federal que desplegó su jurisdicción; d) la materia del segundo juicio serían los vicios atribuidos a aquel pacto de cumplimiento de laudo efectuado ante una Junta Federal; y, e) que está a discusión la eficacia jurídica de dicho acuerdo de voluntades sobre el pago correcto de las prestaciones laudadas, ante los vicios atribuidos en la acción de nulidad planteada al respecto. Luego, donde rige la misma razón debe privilegiarse la misma solución.

"Además, el Alto Tribunal también ha referido que la irrenunciabilidad de tales derechos obedece al carácter público de lo que debe disfrutar todo trabajador, como es el salario suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación, y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia, y en esa medida, el artículo 123 constitucional impone cargas a los patronos, no solamente en relación directa con el nexo contractual entre ellos y sus trabajadores, sino también en relación con la situación de estos últimos considerados como jefes de familia; por lo cual, además de lo establecido en materia de salarios, impone también a los patronos otras obligaciones a favor de la clase trabajadora (capacitación y adiestramiento, escuelas en los casos previstos, garantías de seguridad social, etcétera), así como finalmente garantizar la subsistencia de quienes económicamente dependen del trabajador.

"De modo que es innegable que la renuncia que haga el trabajador de sus derechos por cualquier motivo, a través de convenio puede ser suscepti-

ble de plantearse la nulidad respectiva del pacto que vaya en contra de estas disposiciones de orden público, que tienden a tutelar el producto del trabajo de cada empleado o las prestaciones que podrían serle inherentes conforme al marco constitucional, legal o contractual aplicable.

"En torno a lo cual tampoco son ajenas las prestaciones materia de un laudo, que ulteriormente sean objeto de convenio o transacción.

"En cuanto al tema, es ilustrativa la tesis aislada sin número de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que señala:

"'OBREROS, NO SON RENUNCIABLES LOS DERECHOS QUE LES CONCEDE UN LAUDO.'

"También la tesis aislada sin número de la misma Segunda Sala, que refiere:

"'JUNTAS, TRANSACCIONES RESPECTO DE LOS LAUDOS DE LAS.'

"También es orientadora la tesis aislada sin número del mismo órgano, que refiere:

"'CONFLICTOS ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO, ARBITRADORES EN LOS.'

"Consecuentemente, mientras no se demande la nulidad del acto jurídico celebrado (convenio, transacción, pacto, etcétera.), surte sus efectos, empero, una vez demandada su invalidez, corresponde a la Junta dirimir el conflicto laboral inherente. (Es orientadora la tesis aislada sin número de la otrora Cuarta Sala del Alto Tribunal, de rubro: 'RENUNCIA DE DERECHOS DE LOS OBREROS, EN CONVENIOS ELEVADOS A LA CATEGORÍA DE LAUDOS, ES VÁLIDA MIENTRAS NO SE DECLARE EN JUICIO LA NULIDAD DE DICHOS CONVENIOS.'). Ello porque conserva su eficacia probatoria en cuanto a que los otorgantes del repetido convenio obraron con capacidad intelectual y legal al firmarlo y ratificarlo, pero de acudir a demandar vicios de validez de tal acto, no se puede incurrir en la petición de principio de dar por eficaz el convenio cuya nulidad se demanda, sin resolver sobre los vicios atribuidos que conforma el estudio de fondo conducente.

"Al respecto, por su relación con el tema en análisis, se toma en consideración lo expuesto por José Luis Castillo Alva, Manuel Luján Túpez y Róger Zavaleta Rodríguez, en su obra *Razonamiento Judicial, Interpretación, Argu-*

mentación y Motivación de las Resoluciones Judiciales, segunda edición, Ara editores, Perú 2006, páginas 356 y 357, donde expusieron:

"'Petición de principio. …'

"De ahí que no es válido incurrir en la inconsistencia denominada 'petición de principio' a que antes se hizo alusión.

"En la especie, el tema debatido fue que en opinión de la parte actora, había sido falso el hecho reconocido por el trabajador en el convenio celebrado ante la Junta, en el sentido de haber declarado que se le habían cubierto cantidades previas a la entregada con motivo del convenio laboral ratificado (diferencia de liquidación), es decir, la causa de invalidez la apoyó en el hecho de que era incorrecto que se le cubrieron todas las prestaciones a que tuvo derecho con motivo del laudo dictado sobre las prestaciones vinculadas con su relación de trabajo a razón de algún reconocimiento de pago de cantidades distintas a la recibida ante la responsable, es decir, respecto de $**********.

"Así que el hecho de que hubiere aceptado el actor al celebrar el convenio o ratificarlo, no es óbice, pues ese tipo de argumentos implican una petición de principio al dar por acreditado lo que está sujeto a comprobación y, por ende, no es acertado que deba privilegiarse el criterio restrictivo, de que para acceder a un pronunciamiento al respecto por los tribunales laborales, deba darse mayor eficacia al pacto realizado y manifestaciones de las partes celebrantes, a título de confesión, si esa es la materia de cuestionamiento en ulterior juicio a la luz de la acción de nulidad de convenio, pues sería negar el pronunciamiento jurisdiccional sobre las causas por las que se dice, hubo renuncia a derechos laborales que conforme a la Constitución, ley o disposiciones contractuales aplicables, eran irrenunciables.

"En efecto, como una de las modalidades para dar cumplimiento a un laudo puede ser el propio consenso de las partes colitigantes o vinculadas a las resultas del fallo, sobre los términos en que pactan darse por pagadas de las prestaciones materia de condena. Entonces, al transigir sobre las prestaciones laudadas, queda evidenciado al respecto un convenio, pacto o acuerdo de voluntades, o expresión similar con la que desee denominarse a tal acto, en donde diferentes personas han consensado sobre el cumplimiento de derechos u obligaciones, en la especie, los derivados de un laudo, para ulteriormente dar por concluido el juicio relativo y archivarlo.

"De esa forma, las demandadas llegaron a un acuerdo con la contraparte para dar cumplimiento al laudo dictado en aquel asunto primigenio y,

por ello, acudieron ante la Junta Federal responsable para indicar los términos en que habían pactado la forma de dar por pagadas las prestaciones laudadas, de ahí que se trata de un convenio (acuerdo de voluntades) sobre la condena laboral impuesta, como en la especie sucedió. Inclusive, esta situación está corroborada porque en el auto de siete de agosto de dos mil nueve indicado, quedó señalado que era para celebrar la cumplimentación de laudo a través de un convenio cuyas cláusulas se anotaron al respecto, en las que las partes celebrantes acordaron la cantidad con las que estimaron pagadas las prestaciones materia de condena y su recibo por el trabajador, así como fue acordada su aprobación por la Junta y solicitud de archivo del asunto. De modo que la acción de nulidad implicaba analizar si hubo la renuncia de derechos.

"En virtud de lo anterior y criterios jurisprudenciales del Alto Tribunal, este órgano colegiado estima que no es factible compartir la tesis aislada del Tribunal Colegiado de Circuito que invoca a su favor la secretaría tercera interesada, a saber, la tesis aislada V.2o.C.T.3 L del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, habida cuenta que en materia laboral la irrenunciabilidad de derechos citada, no dependen de aspectos como los que anota dicho criterio, a saber:

"'RENUNCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. NO LA CONSTITUYE EL CONVENIO EN EL QUE EL TRABAJADOR ACEPTA PRESTACIONES INFERIORES A LA CONDENA IMPUESTA AL PATRÓN, SI ÉSTE IMPUGNÓ EL LAUDO RELATIVO MEDIANTE JUICIO DE AMPARO DIRECTO, Y EL ACUERDO DE VOLUNTADES SE SUSCRIBE CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS EVENTUALES PARA LAS PARTES.'

"En efecto, al tenor de lo previamente expuesto la acción de nulidad viene condicionada por el carácter irrenunciable de derechos tutelados a favor de los trabajadores como resultado del fruto de su trabajo y prestaciones inherentes previstas constitucional o legalmente, incluyendo los beneficios que hubieren operado a su favor de índole contractual, como lo refiere la jurisprudencia 2a./J. 1/2010 de la Segunda Sala. Aspectos que son de orden público y, por ende, limitantes para la autonomía de la voluntad del empleado, al celebrar pactos, convenios o transacciones con su patrón. Irrenunciabilidad de derechos que tampoco está condicionada a que estén reconocidos previamente mediante un laudo, ni que éste sea firme en términos constitucionales, pues la citada acción de nulidad puede plantearse incluso contra convenios o liquidaciones realizadas fuera de juicio laboral, es decir, elaboradas sin contienda jurisdiccional de por medio.

"Consecuentemente, la irrenunciabilidad de derechos referida y posibilidad de demandar la nulidad de convenio, no está supeditada ni restringida a que exista previamente un laudo inmodificable, ni deriva de que pudiera estar sub júdice su constitucionalidad, en razón de algún amparo directo pendiente de dirimirse, o bien, que la institución en comento, prevista a rango constitucional y de orden público, pueda estar sujeta al fin que se propongan las partes al celebrar convenio, en torno a evitarse mayores dilaciones, riesgos eventuales o perjuicios en torno a las prestaciones obtenidas.

"Estos factores simplemente no son la condición para que opere el mandato constitucional y legal señalado, de ahí que no se comparte lo referente a que en materia laboral, la renuncia de derechos sea inexistente frente a convenios celebrados bajo un contexto de dar por concluida alguna impugnación en amparo directo, de desistir del estudio de constitucionalidad de un laudo dictado por la Junta o para evitar perjuicios como los que alude dicha tesis aislada, menos de que las prestaciones laborales se pudieran asumir como meras expectativas cuando el laudo, por su sola emisión surte efectos jurídicos y merece valor como decisión de un tribunal de trabajo que ha dirimido la controversia que le fue planteada, en esa medida, como resolución que le puso fin al juicio y adoptó una decisión sobre las prestaciones demandadas.

"En función de lo cual tampoco podría compartirse el aspecto referente a que no se puede renunciar a derechos que aún no están definidos plenamente, pues el razonamiento es a la inversa, los derechos laborales conducentes existen en la medida que se han actualizado los supuestos de hecho para merecer aquellos, es decir, una vez que en la realidad se actualizan los hechos descritos en un enunciado normativo y, el pronunciamiento jurisdiccional (laudo) viene a declarar si ocurrió dicha actualización del derecho a nivel de los hechos debatidos; y, tal fallo vale desde el momento en que se aprueba por el órgano de justicia laboral, dado que constituye la resolución definitiva del juicio obrero correspondiente que surte efectos acorde a la Ley Federal del Trabajo, la que en modo alguno asigna al amparo directo la cualidad de restarle efectos al laudo por su simple promoción, sino en todo caso la Ley de Amparo dispone la posibilidad de suspender la ejecución de tal acto bajo determinados requisitos, deteniendo su aplicación en los términos señalados para esta materia, preservando la subsistencia del trabajador.

"Finalmente, la sentencia que decida el amparo, de otorgar la protección constitucional, es la que podría impactar en su validez jurídica, pero no la sola promoción de una demanda de amparo directo.

"Además, el Alto Tribunal ha privilegiado que la autoridad que conoce del asunto debe hacer la declaración o reconocimiento de nulidad respectivo, ya sea por vía de acción o de excepción, o bien, de oficio, por aplicación directa de la Ley Suprema.

"Consideración que tiene apoyo en lo señalado en la jurisprudencia 2a./J. 195/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dispone:

"'CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.'

"Por lo que no es factible hacer nugatoria la facultad de los tribunales laborales de analizar la ineficacia de las cláusulas relativas de un pacto obrero, por renuncia de derechos laborales, a razón de contextos como los que anota el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, habida cuenta que se vaciaría el contenido de la acción de nulidad de convenio y la figura de derechos irrenunciables que dispone el marco constitucional y jurídico del país.

"El acceso a un estudio de la acción, en controversias como la aquí precisada, debe encontrar solución en el ejercicio eficaz de las facultades de los tribunales laborales para pronunciarse sobre este tipo de temas, y posible renuncia de derechos laborales en convenios que pudieran ser nulos, parcial o totalmente, acorde a lo dispuesto en el inciso h) de la fracción XXVII del apartado 'A' del artículo 123 de la Constitución Federal.

"Ciertamente, el deber del órgano resolutor de pronunciarse al respecto, le permitía analizar tal cuestión, por la sencilla razón de su deber de análisis oficioso que rige en tales temas, por aplicación directa de la indicada disposición constitucional.

"Lo que se confirma con lo indicado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia anterior, porque en lo que es materia de interés, resolvió lo siguiente:

"...

"Además, en virtud del anterior criterio, que orienta el lineamiento jurisprudencial vigente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, resulta inaplicable a la fecha, los que sean de fecha anterior, como son los correspondientes a la Quinta y Sexta Épocas, porque debe preferirse la interpretación vigente del Alto Tribunal, que deriva de las jurisprudencias 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010, analizadas, así como los criterios en que refirió que dicha irrenunciabilidad de derechos también aplica para convenios o transacciones sobre laudos.

"Asimismo, porque ésta es la solución más acorde bajo una interpretación conforme al derecho fundamental y humano de acceso efectivo a la justicia o tutela judicial efectiva, previsto tanto en sede internacional (artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), como en el ámbito nacional mexicano (artículo 17 de la Constitución Federal), porque se opta por privilegiar el acceso a la justicia laboral, limitando los casos en que por excepción, pueda considerarse plenamente descubierto un genuino obstáculo para decidir la controversia planteada en el juicio, ya que el tribunal laboral no puede denegar justicia en torno a analizar la validez o invalidez de la cláusula respectiva en que se hubiere aceptado o reconocido por la parte obrera, el pago de una cantidad o cantidades que refiere no cubiertas por su patrón, previo a la celebración de convenio, así como tampoco incurrir en la petición de principio de dar por válido el acuerdo de voluntades que está a discusión con la acción de nulidad en el juicio laboral conducente. Tampoco asumir como confesión esa declaración para efectos de la acción de nulidad, pues es la cuestión controvertida en juicio.

"Esto último, con apoyo en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once del mismo mes y año, que tutela explícitamente los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Igualmente, contempla la interpretación conforme de las normas constitucionales e internacionales conducentes, así como el imperativo de tutela de los derechos humanos por todas las autoridades del Estado, además de preferir la interpretación que sea más favorable a las personas.

"Elemento de interpretación jurídica que igualmente es susceptible de aplicar en el caso específico, para optar en la medida de los posible, por la interpretación que sea conforme con los derechos fundamentales y humanos precisados, sobre el derecho a una tutela judicial sencilla, efectiva y pronta.

"Asimismo, para lo que es objeto de estudio del control de convencionalidad que deben aplicar los tribunales del país, es de especial interés la

denominada 'interpretación conforme en sentido amplio', que significa que los Jueces del país –al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano–, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

"Elemento de interpretación jurídica que igualmente es susceptible de aplicar en el caso específico, para optar en la medida de lo posible, por la interpretación que sea conforme con los derechos fundamentales y humanos.

"Interpretación conforme que tampoco era ajena a los anteriores esquemas de solución de asuntos en México, por los órganos del Poder Judicial de la Federación, como ya lo reflejaba la jurisprudencia 2a./J. 176/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.'

"De acuerdo al estándar internacional señalado, el Estado Mexicano se encuentra obligado a establecer y garantizar recursos judiciales idóneos y efectivos para la protección de los derechos del gobernado; por lo que, deberá establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, así como dar aplicación efectiva a los mismos.

"Así, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben ser efectivos y adecuados, esto es, que sean idóneos para proteger la situación jurídica infringida y que sean capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos. La noción de efectividad del recurso que emana del artículo 25 de la Convención Americana, se asocia a la idoneidad del remedio para prevenir, detener, privar de efectos y reparar la afectación al derecho humano de que se trate.

"De manera que es posible privilegiar una solución del caso acorde con los referidos estándares de sencillez, efectividad y prontitud de la justicia, como es en materia de trabajo, en torno a concluir que es factible que los tribunales laborales pueden resolver sobre un reclamo de nulidad de convenio de prestaciones laudadas, no obstante que la parte trabajadora hubiere aceptado previamente recibir algún monto o cantidad adicional a la entregada al celebrar o ratificar el convenio que líquida las prestaciones laudadas, pues si opta por la acción de nulidad de convenio, entonces subsiste la potestad del órgano jurisdiccional laboral de pronunciarse al respecto, sin obstaculizarlo a razón de argumentos como la validez del propio convenio o de los acuerdos

de voluntades contenidos en el mismo sobre algún hecho o declaraciones al respecto de las partes celebrantes, cuando ello es el tema debatido.

"Conclusión con la que se impide mermar la sencillez y efectividad del acceso a la justicia laboral, privilegiando que la parte actora pueda deducir su planteamiento sin obstáculos innecesarios, rígidos o formales, carentes de proporcionalidad, razonabilidad o justificación, atento a las consideraciones expuestas.

"Lo que es así, ya que de existir renuncia de derechos laborales al respecto (cuestión que corresponde al fondo de la controversia), rige el imperativo de orden público en materia de trabajo, de no dar eficacia a ese tipo renuncia de derechos, por disposición constitucional de aplicación directa.

"Basta que en el procedimiento laboral esté en pugna ese acuerdo de voluntades a razón de algún vicio o hecho discutido por las partes –como ocurre tratándose de cuando se demanda la acción de nulidad–, para que el órgano jurisdiccional del conocimiento advierta los alcances de la litis planteada y, verifique si existen los vicios atribuidos o yerros invocados a las manifestaciones de las partes o voluntad, al tenor de los hechos y elementos concretos en que tenga apoyo la demanda laboral, para concluir que corresponde examinarlo a la Junta relativa, sin alegar obstáculos como la descrita petición de principio.

"Ello, porque está de por medio el mandato previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ello, debe atender a las jurisprudencias 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010, transcritas.

"Lo anterior, sin que, por el momento se prejuzgue sobre lo acertado o no de la renuncia de derechos manifestada por la parte quejosa y, que en todo caso, corresponderá su estudio a la autoridad laboral que conoció de la controversia laboral conducente, al ser incorrecta la premisa en que sustentó la imposibilidad jurídica que alegó para el estudio de la acción de nulidad en el juicio de origen.

"En virtud de lo anterior, en su oportunidad procédase a efectuar la denuncia de contradicción de tesis respectiva, acorde a la Ley de Amparo vigente.

"En consecuencia, es incorrecta la conclusión de la Junta responsable en el laudo combatido de que no podía prosperar la nulidad de convenio de

referencia, ante el reconocimiento que hizo el actor de habérsele liquidado las prestaciones laudadas, incluso con motivo de la entrega de cantidad o cantidades adicionales en forma previa a la celebración de convenio y a la cantidad que le fue entregada al comparecer ante la Junta, o bien, que había confesión de su parte al respecto que le perjudicaba, son argumentos incorrectos en este tipo de juicios cuando la materia de la acción es la validez de tal acuerdo de voluntades.

"Ese tipo de obstáculos son contrarios al derecho a una justicia laboral pronta, sencilla y efectiva, que no puede evadir el examen de la litis, por situaciones como las comentadas, asumiendo a priori que no puede ser nulo el convenio realizado por haberse convenido, cuando lo que toca a la responsable resolver es si ese consenso está viciado por haber ocurrido o no, la renuncia de derechos laborales a los que no pudiera abdicar el trabajador, pese a que dijera lo contrario en la transacción realizada. …"

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. Amparo directo 31/2006

1. **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** promovieron juicio laboral ********** (después ********** y ********** acumulados) del índice de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que demandaron al Instituto Mexicano del Seguro Social la reinstalación en el puesto de notificadores ejecutores.

2. El doce de julio de dos mil uno se emitió laudo en dicho juicio laboral, en el que se determinó que estaba acreditado el despido injustificado alegado en la demanda y se condenó al instituto demandado a la reinstalación de los demandantes y pago de los salarios vencidos.

3. El instituto demandado promovió juicio de amparo directo, radicado con el número ********* del índice del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.

4. El veintiuno de febrero y cinco de abril de dos mil dos, las partes celebraron convenios de terminación de las relaciones laborales, en los que se estipuló lo siguiente:

"III. Ambas partes manifiestan que en razón de la situación actual del juicio laboral y derivado de conversaciones sostenidas han arribado a un

acuerdo en términos de la fracción primera del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, en dar por terminada por mutuo consentimiento la relación de trabajo; asimismo y con el propósito de dar cumplimiento a la condena emitida por la autoridad laboral, en el laudo de fecha 12 de julio de 2001 y poner fin al juicio laboral que nos ocupa, mediante el pago de la cantidad de ********** … correspondiente al pago de la indemnización en términos de lo dispuesto por la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, a fin de evitar la eventualidad de mayores riesgos para sus respectivos intereses. En la inteligencia de que el actor acepta de manera voluntaria y libre sin coacción alguna recibir el 80% del alcance líquido indicado en el recibo de liquidación que se finiquita que se anexa al presente convenio.

"Cláusulas

"'Primera. «La parte demandada» Instituto Mexicano del Seguro Social, declara que con el objeto de dar cumplimiento al laudo de fecha 12 de julio de 2001, emitido bajo el presente expediente No. **********, promovido por (nombre del actor) y otros en donde desde luego, se encuentra incluido el C. … y en este mismo acto hace entrega de la cantidad de $**********, mediante la cual el instituto le cubre al actor, todas y cada una de las prestaciones que le corresponden en términos de lo dispuesto por la cláusula 56 del contrato colectivo que rige las relaciones entre el instituto y sus trabajadores.'

"'Segunda. El instituto manifiesta que mediante el pago de la cantidad de $ **********, le cubre al actor todas y cada una de las prestaciones que establece la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, como lo es 150 días correspondientes a la indemnización constitucional, en relación al salario de la última categoría en ese desempeñaba el actor, 50 días por cada año al servicio prestado como liquidación de antigüedad, parte proporcional de vacaciones aguinaldo y demás prestaciones contractuales reclamadas en su escrito de demanda, salarios caídos correspondientes al periodo de la tramitación del juicio, el pago de 90 días de sueldo tabular con motivo de la terminación de la relación laboral, en términos de lo dispuesto por el último párrafo de la cláusula referida tal como consta en la liquidación finiquita que se anexa al presente convenio para que forme parte integrante del mismo, donde se relacionan las percepciones y deducciones.'

"'Tercera. «El actor» declara que con la cantidad de $ ********** que hoy recibe se le cubren todos y cada uno de los conceptos reclamados en su escrito de demanda, incluidos los salarios caídos generados durante la tramitación del conflicto y hasta el 20 de febrero del 2002, así como los correspondientes a la indemnización en términos de lo dispuesto por la cláusula 56 del

contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones entre el instituto y sus trabajadores, por lo que en este mismo acto recibe de conformidad la liquidación que se le entrega, dándose por pagado de todas y cada una de las prestaciones motivo de la condena, en consecuencia solicita, se tenga por cumplimentada la condena decretada en el laudo de fecha 12 de julio del 2001 y por aceptada la cantidad que se entrega por concepto de indemnización, en la inteligencia de que el desglose de cada una de las prestaciones cubiertas se detallan en el recibo de liquidación finiquita que se anexa al presente convenio, donde aparecen las percepciones y deducciones, para que forme parte integrante del mismo, como también se detallan el descuento con motivo de la licencia sin goce de sueldo que fui objeto, solicitando que se deje sin efecto la acción de reinstalación intentada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, no reservándose acción ni derecho alguno en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social en el presente ni en el futuro, por lo que desde ahora solicito el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, es mi deseo dejar sin efectos el trámite de los expedientes laborales números **********, **********, ********** y ********** (sic) radicados los tres primeros ante esta misma autoridad y el último ante la Junta Especial Número Cuarenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, B.C., lo anterior por así convenir a mis intereses.'

"'Cuarta. Declara «El instituto» que en este mismo acto hace entrega al actor del cheque ... de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $ **********, girado contra la cuenta ... mediante el cual cubre al actor la indemnización que se refiere la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, que rige las relaciones entre el instituto y sus trabajadores, así como todas y cada una de las prestaciones reclamadas, cuyo desglose se realiza en el recibo de liquidación finiquita que se anexa al presente convenio.'

"'Quinta. Declara el actor que estoy de acuerdo con las condiciones del convenio y cheque que recibo en este mismo acto del instituto demandado, a la orden del suscrito ... y el cual recibo a mi entera conformidad, dándome por pagado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en la demanda, recibiendo como indemnización la suma de $ **********, estando de acuerdo en dejar sin efectos la reinstalación pretendida en mi escrito de demanda, dando por terminada la relación de trabajo con el instituto, por así convenir a mis intereses, optando de manera voluntaria y libre sin coacción alguna por el pago de la indemnización a que se contrae el presente convenio, cuyo desglose de prestaciones se me hace en el recibo de liquidación finiquita que obra agregado al mismo, donde se señalan las percepciones a que tuve derecho, así como las deducciones, tal como consta en el referido recibo de liquidación finiquita, por lo que recibo dicha suma sin reservarme ninguna acción

o derecho en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitando además se ordene el archivo de los expedientes laborales **********, **********, ********** y ********** (sic) como asuntos total y definitivamente concluidos.'

"El recibo de finiquito anexo al convenio tiene el siguiente contenido:

"150 días de salario	**********
487 días por 9 años 18 quincenas	**********
2571 salarios caídos del … al …	**********
90 días	**********
Suma	**********
151 Impuesto sobre Producto del Trabajo	**********
Pago de convenio	**********
Licencias	**********
Suma	
Alcance líquido	**********
80%	**********

"**5.** Tales convenios fueron ratificados y aprobados por la Junta que emitió el laudo, conforme a lo siguiente:

"Vista la comparecencia de las partes … y, en virtud de que vienen celebrando el presente convenio dando cumplimiento al laudo de fecha 12 de julio de 2001, y para ese efecto el apoderado legal del instituto en este acto viene exhibiendo el cheque No. … por la cantidad de $ **********, mediante el cual se le vienen cubriendo al ahora actor el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su demanda, optando por el pago de la indemnización en términos de la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo a que se ha hecho referencia en el presente convenio, haciéndose constar que se anexa el recibo de liquidación finiquita donde se desprenden detalladamente las prestaciones cubiertas, así como las deducciones que se realizaron en los términos propuestos. Por lo que en consecuencia se ordena el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido en lo que hace al C. …"

6. El diecinueve de noviembre de dos mil dos, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, promovieron un nuevo juicio laboral en el que demandaron la nulidad de los convenios que cada uno de ellos había celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social dentro de los autos de los juicios laborales ********** y

********** acumulados, como prestaciones reclamaron la nulidad absoluta respecto del cumplimento total del laudo de doce de julio de dos mil uno, que se declarara firme la condena de dicho laudo, que se hiciera la liquidación correspondiente y que se condenara al instituto demandado al pago de los salarios vencidos a cada uno de los actores, por no haber hecho el pago de las prestaciones indemnizatorias pactadas en el contrato colectivo de trabajo.

Ese nuevo juicio laboral se radicó con el número de expediente ********** del índice de la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

En los hechos de la demanda, manifestaron que aunque algunos trabajadores habían sido reinstalados, el instituto demandado no había cumplido con la obligación de retribuirles, y que ante la necesidad económica se vieron obligados a aceptar la cantidad que les ofreció el patrón. Asimismo, los demás trabajadores, no reinstalados, también celebraron convenios mediante los cuales se les pagaron cantidades inferiores a las que realmente les correspondían.

Hicieron valer la nulidad de todos los convenios celebrados, en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, ya que se pactó únicamente el pago del ochenta por ciento de la cantidad que les correspondía por indemnización, de acuerdo con la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, y porque las prestaciones pagadas no se cuantificaron con el monto del salario integrado que cada uno de ellos percibió al momento del despido injustificado.

El instituto demandado negó la procedencia de la acción intentada y adujo que la celebración y ratificación de los convenios se realizaron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien los aprobó al no existir renuncia de derechos; que mediante esos convenios las partes habían consentido dar por terminada la relación de trabajo; que era verdad que se había pagado a los actores el ochenta por ciento de las prestaciones a que tenían derecho, pero que esa fue su voluntad, máxime que cuando se celebraron los convenios, el laudo de doce de julio de dos mil uno, no se encontraba firme por haberse promovido en su contra demanda de amparo directo. Además, la nulidad de los convenios le ocasionaba grandes perjuicios, pues fue precisamente su celebración lo que motivó que el instituto desistiera del juicio de amparo promovido contra el laudo mencionado, porque ambas partes deben estarse a lo pactado formal y técnicamente ante la autoridad laboral debidamente constituida.

7. El catorce de noviembre de dos mil cinco, la Junta del conocimiento emitió laudo en el que declaró improcedente la nulidad de los convenios con los que se dio cumplimiento al laudo de doce de julio de dos mil uno.

8. El nueve de diciembre de dos mil cinco, los actores promovieron juicio de amparo directo, que se radicó con el número de toca ********** del índice del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, quien negó el amparo, por ejecutoria de catorce de junio de dos mil seis, con base en las siguientes consideraciones:

"SEXTO.— … en el presente asunto, el análisis de los escritos de demanda y contestación, así como de las pruebas aportadas por las partes, evidencia que la controversia laboral inherente a los expedientes acumulados ********** y **********, relativos a la demanda promovida por los ahora quejosos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, finalizó con laudo de doce de julio de dos mil uno, en el que se condenó a la demandada … 'a que pague a todos y cada uno de los demandantes, todas y cada una de las prestaciones contempladas en el contrato colectivo de trabajo, que omitió otorgar a los trabajadores actores, desde el inicio de su relación obrero patronal, prestaciones que se encuentran contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, como lo son: ayuda de renta, compensaciones, prima vacacional, vacaciones, aguinaldos, estímulos por asistencia, estímulos por puntualidad, tiempo extra, reparto de utilidades ayuda para despensa, fondo de ahorro, así como también todas y cada una de las prestaciones que señala el contrato colectivo de trabajo.'

"…

"Asimismo, en autos está reconocido por las partes que en contra de dicho laudo, el instituto demandado promovió juicio de amparo directo, tramitado con el número ********** del índice del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, como se corrobora con la copia de la ejecutoria de veinte de junio de dos mil dos (folios noventa y siete a ciento dos ibídem), exhibida por los propios actores.

"Ahora bien, con posterioridad a la emisión del laudo de doce de julio de dos mil uno, las partes celebraron, los días veintiuno de febrero y cinco de abril de dos mil dos, convenios de terminación de las respectivas relaciones laborales; el contenido de dichos documentos (ofrecidos tanto por los actores como por la demandada) es de un tenor similar y, en esencia, en ellos se hace constar:

"a) Que los actores ahora quejosos … por una parte, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su apoderado legal, comparecieron ante la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de manifestar por escrito su voluntad de dar por terminadas las relaciones laborales que entre ellos existían, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.

"b) Que las partes, después de llegar a un acuerdo para finalizar el juicio laboral instaurado por los actores en contra del instituto, y a fin de evitar 'la eventualidad de mayores riesgos para sus respectivos intereses', decidieron finalizar por mutuo consentimiento el vínculo de trabajo, en términos de la fracción I del artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y dar cumplimiento a la condena establecida en el laudo de doce de julio de dos mil uno, mediante el pago de diversas cantidades que correspondían a 'todas y cada una de las prestaciones' previstas en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo (150 días de indemnización, 50 días de salario por año de servicios prestados por antigüedad, parte proporcional de vacaciones y de aguinaldo, salarios caídos y 'demás prestaciones contractuales reclamadas en su escrito de demanda'), en el entendido de que los trabajadores aceptaban recibir el 80% de la cantidad calculada por ese concepto en el recibo de finiquito anexo.

"c) En virtud del pago efectuado, los actores declararon que se daban por pagados de las prestaciones a que había sido condenada la enjuiciada, en el laudo de doce de julio de dos mil uno, por lo que solicitaron el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. (se transcribe uno de los convenios)

"Por otra parte, en el recibo finiquito anexo al citado convenio, se advierte que el desglose de las cantidades pagadas …

"Esos mismos conceptos, con las variaciones correspondientes en las cantidades asentadas, son los que se incluyen en los diversos recibos de finiquito de los diversos trabajadores.

"Pues bien, en las transcripciones anteriores se advierte que, en cierta medida, los quejosos parten de una base errónea al afirmar que en los convenios se pactó el pago 'del 80% del alcance líquido de la cantidad a que ascendió la condena' emitida en el laudo de doce de julio de dos mil uno, pues si bien en los documentos señalados se indicó que uno de los objetivos de su suscripción era que se tuviera por cumplida tal condena, ello respondía a que las partes aceptaban dar por terminada la relación laboral, entregar y recibir el monto correspondiente a las prestaciones previstas en la cláusula 56 del

contrato colectivo de trabajo, entre otras, ciento cincuenta días de salario por indemnización, cincuenta días de salarios por cada año de servicios prestados, salarios caídos y parte proporcional de aguinaldo y vacaciones.

"Asimismo, tampoco es exacto lo que manifiestan, en el sentido de que el salario con base en el cual se calcularon las prestaciones cubiertas era erróneo y, por tanto, esa circunstancia también implicaba una renuncia de derechos.

"Es así, ya que cuando con motivo de la terminación voluntaria de una relación laboral se efectúa una liquidación o finiquito, la eventual diferencia que pudiera surgir al haberse cuantificado con base en un monto salarial incorrecto, no constituye propiamente una renuncia de derechos, si se considera que la conclusión de la relación de trabajo fue porque así lo pactaron las partes, máxime que la existencia de tales diferencias y el hecho de que no se le paguen al trabajador no implica por sí solo, el dejar de percibir los derechos establecidos a favor del obrero en el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución General de la República y en los preceptos 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo, a saber, la retribución de la indemnización constitucional de tres meses que corresponden a un despido injustificado, ni el importe de salarios devengados o de indemnizaciones, ni las demás prestaciones que se generen ordinariamente por los servicios prestados. En todo caso, la renuncia de derechos se determinará cuando, por cualquier causa, el trabajador deje de gozar de esos derechos consagrados en la constitución y en la legislación laboral.

"...

"Por otra parte, la circunstancia de que las partes, al celebrar los convenios, aceptaron que los trabajadores recibirían el 80% de las cantidades correspondientes a las prestaciones previstas en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo no implica renuncia de derechos en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.

"En efecto, tanto los actores como la enjuiciada ofrecieron copia de diversas cláusulas del contrato colectivo de trabajo que fueron utilizadas como base para efectuar la liquidación hecha en los convenios y recibos de finiquito correspondientes; a dichas documentales debe otorgárseles valor pleno, en tanto fueron expresamente reconocidas por los contendientes en la controversia laboral como parte del pacto colectivo que regía los vínculos de trabajo; la cláusula 56 (folio doscientos cincuenta y siete ibídem), cuyo texto

fue utilizado en los convenios para asentar cuáles eran las prestaciones conforme a las cuales se hacía la liquidación, a la letra dice:

"'Cláusula 56. Indemnización

"'Si un trabajador es separado injustificadamente y optare por la indemnización y no por la reinstalación, el instituto se obliga a pagarle de inmediato, como indemnización económica que establece la Constitución, la cantidad correspondiente a ciento cincuenta días de salario de la última categoría desempeñada a la fecha de la separación por concepto de indemnización y cincuenta días por cada año de servicios prestados o parte proporcional del año, como liquidación de antigüedad, más la parte proporcional correspondiente a vacaciones, aguinaldo y las demás prestaciones económicas que el instituto adeudare al trabajador y que señale este contrato. Mientras la indemnización y la antigüedad no sean pagadas, el trabajador recibirá los salarios vencidos.

"'...

"'Si un trabajador es separado injustificadamente y demandare la reinstalación, el instituto se obliga además del cumplimiento del laudo de autoridad competente, el pago de noventa días del sueldo tabular vigente a la fecha de la separación.'

"La cláusula mencionada, utilizada como base en los convenios para realizar la liquidación de los trabajadores, prevé las siguientes prestaciones para los trabajadores que son separados injustificadamente de su empleo: el pago de ciento cincuenta días de salario del último puesto desempeñado como indemnización; cincuenta días de salario por cada año de servicios prestados, por concepto de antigüedad; parte proporcional de vacaciones y aguinaldo; noventa días de salario tabular; y todas las demás prestaciones económicas adeudadas previstas en el contrato colectivo de trabajo.

"En los convenios cuya nulidad se demandó, se hizo constar que los trabajadores, en virtud de dar por finalizado el conflicto laboral, dar cumplimiento a la condena emitida en el laudo de doce de julio de dos mil uno, y terminar de la relación laboral entre las partes, serían finiquitados en términos de la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo, transcrita en párrafos precedentes, y que en cumplimiento a dicha disposición del pacto colectivo, los actores recibían determinadas cantidades desglosadas en el finiquito anexo, a saber: ... También se estipuló que de la cantidad resultante de la suma de los conceptos previstos en dicha cláusula, los trabajadores recibirían el 80%.

"Pues bien, la renuncia a que hace referencia el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo origen reside en el artículo 123 de la Carta Magna, presupone la existencia de un derecho a favor de la parte obrera y, en caso de celebración de convenios, surge cuando el trabajador se compromete a no hacerlo valer, de manera unilateral y sin recibir compensación alguna. En el caso, los actores hicieron depender la existencia de ese derecho, de la condena que fue fincada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el laudo de doce de julio de dos mil uno, y adujeron que el recibir sólo el 80% de la liquidación implicaba la renuncia a las prestaciones contenidas en dicho laudo.

"No obstante, la fuente del derecho que adujeron les correspondía, esto es, el laudo mencionado, en la fecha de la celebración de los convenios (febrero y abril de dos mil dos), no se encontraba firme, en virtud de la promoción del juicio de garantías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de dicho fallo (resuelto hasta el veinte de junio de dos mil dos).

"...

"Es decir, la determinación de la Junta en cuanto a la condena en contra del instituto se encontraba sub júdice en función del juicio de amparo promovido por la parte demandada, con la posible consecuencia de que, de resolverse favorablemente a la entonces quejosa, la condena decretada pudo haber quedado sin efectos, y entonces el derecho de los actores a recibir el pago de las prestaciones reclamadas y las contenidas en el contrato colectivo de trabajo habría desaparecido. Por tanto, es claro que la condena emitida por la Junta no constituía ningún derecho firme a favor de los actores.

"En estas condiciones, si la voluntad de las partes intervinientes en los convenios fue dar por terminado el conflicto laboral y efectuar el pago de determinadas cantidades de dinero con fundamento en la cláusula 56 del contrato colectivo de trabajo (aunque este porcentaje haya sido menor al cien), a fin de '... evitar la eventualidad de mayores riesgos para sus respectivos intereses ...', por ejemplo, el que en virtud del juicio de garantías promovido por el patrón, se declarara sin efectos el laudo con el consecuente perjuicio para los actores de no recibir el pago de las prestaciones reclamadas; o por el contrario, se negara la protección federal solicitada provocando, en perjuicio del instituto, la firmeza de la resolución reclamada; entonces no puede estimarse que la celebración de los convenios y la entrega del 80% de las cantidades calculadas impliquen renuncia de derechos.

"Es así, toda vez que válidamente las partes pueden celebrar convenios para liquidar de algún modo prestaciones, cuyo monto se considere incierto,

fijando la interpretación de las correspondientes cláusulas del contrato o estableciendo de común acuerdo las verdaderas bases que deben regir para hacer el cómputo de lo adeudado, estableciendo las mutuas concesiones que las partes hacen y, en virtud de las cuales, consideran que sus respectivas pretensiones han quedado satisfechas, lo que en el caso ocurrió; sin que sea óbice que esa cantidad pudiera ser menor a la que haya sido condenada la parte patronal en el laudo, o a la que se calculase en el respectivo incidente de liquidación, pues, como se mencionó en párrafos precedentes, al celebrarse los convenios, el laudo de doce de julio de dos mil uno, no se encontraba firme, por lo que, en tanto, no se resolviera el juicio de amparo directo promovido por el patrón, ningún derecho pudo generar aquella resolución en favor de los trabajadores.

"Cabe invocar en apoyo, en lo conducente, la tesis aislada sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página mil ciento noventa y cinco, Tomo CXXV, del *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, que a la letra dice: 'TRANSACCIONES EN MATERIA DE TRABAJO, CUANDO YA HAY LAUDO.'

"En estas condiciones, lo aquí expuesto puede resumirse de la siguiente manera: de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incisos g) y h), de la Constitución y 33 de la Ley Federal de Trabajo, la renuncia formulada por los trabajadores respecto de ciertos bienes o prestaciones derivadas de los derechos que en su favor tutela la propia Constitución o la ley son nulas y carecen de efectos jurídicos.

"Por tanto, para la operancia de esta causa de nulidad es presupuesto la existencia de un derecho subjetivo que de manera indudable pertenezca a la esfera jurídica del trabajador y que éste, mediante un acto voluntario (convenio de liquidación) pacte con el patrón el no ejercicio de ese derecho o abdique de recibir lo correspondido. En consecuencia, no existe la renuncia de derechos a que se refiere la normatividad invocada, si en el expediente de un juicio laboral en el que ya se dictó laudo a favor de la parte obrera, pero se encuentra pendiente de resolver el juicio de amparo directo promovido por la patronal condenada; tanto ésta como la trabajadora celebran un convenio en el que, por un lado, deciden concluir la relación laboral en términos de lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; y por otro, convienen en el pago de las prestaciones materia de la condena, aunque en términos cuantitativa o cualitativamente distintos o incluso inferiores a los que prevé la ley del contrato de trabajo.

"Es de esta manera en virtud de que no puede afirmarse que los derechos laborales reconocidos en el laudo en cuestión pertenezcan de manera

incontrovertible a la esfera jurídica del obrero; sobre todo, porque tal resolución se encuentra sub júdice en función del juicio de amparo directo promovido por la patronal; situación que implica la posibilidad de que se prive de efectos tal laudo y que, incluso, al final se decida absolver a la enjuiciada. En tales condiciones, sin perder de vista la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo y la disposición imperativa de nulidad de las convenciones que contienen renuncia de derechos en perjuicio de la parte trabajadora; en el supuesto que se comenta el presupuesto necesario para la operancia de la nulidad (la existencia de su derecho), propiamente no se configura, lo que se corrobora aún más si en el convenio cuya nulidad se pide las partes hacer constar que lo celebran para evitar la eventualidad de recibir un perjuicio mayor, o bien, que en función de lo pactado la patronal desiste del juicio de amparo directo promovido, o alguna otra cuestión similar que ponga de manifiesto que ese acuerdo de voluntades se lleva a cabo ante la posibilidad de obtener un fallo desfavorable, al resolverse el juicio de amparo directo.

"Por tanto, con independencia de que las razones expresadas por la Junta responsable no hayan sido las idóneas para desestimar la pretensión de los actores en cuanto a la declaratoria de nulidad de los convenios reclamada, lo cierto es que la autoridad laboral estuvo en lo justo al concluir de ese modo; por lo cual, el laudo reclamado no resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales …"

Dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada V.2o.C.T.3 L, de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

"RENUNCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. NO LA CONSTITUYE EL CONVENIO EN EL QUE EL TRABAJADOR ACEPTA PRESTACIONES INFERIORES A LA CONDENA IMPUESTA AL PATRÓN, SI ÉSTE IMPUGNÓ EL LAUDO RELATIVO MEDIANTE JUICIO DE AMPARO DIRECTO, Y EL ACUERDO DE VOLUNTADES SE SUSCRIBE CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS EVENTUALES PARA LAS PARTES.—De acuerdo con los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incisos g) y h), de la Constitución y 33 de la Ley Federal del Trabajo, la renuncia formulada por los trabajadores respecto de ciertos bienes o prestaciones derivados de los derechos que en su favor tutela la propia Constitución o la ley, es nula y carece de efectos jurídicos. Por tanto, para la operancia de esta causa de nulidad es presupuesto la existencia de un derecho subjetivo inherente a la esfera jurídica del trabajador y que éste, mediante un acto voluntario (convenio de liquidación) pacte con el patrón el no ejercicio de ese derecho o abdique de recibir lo que le corresponde. En consecuencia, no

existe la renuncia de derechos si en el expediente del juicio laboral en el que se dictó laudo a favor de la parte obrera, se encuentra pendiente de resolver el juicio de amparo directo promovido por la patronal condenada, y tanto ésta como la trabajadora celebran un convenio (transacción) en el que, por un lado, deciden concluir la relación laboral en términos del artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; y por el otro, convienen en el pago de las prestaciones materia de la condena, aunque en términos cuantitativa o cualitativamente distintos o incluso inferiores a los que prevé la ley o el contrato de trabajo. Es así, porque no puede afirmarse que los derechos laborales reconocidos en el laudo pertenezcan de manera incontrovertible a la esfera jurídica del obrero; ya que tal resolución se encuentra sub júdice en función del juicio de amparo directo promovido por la patronal, situación que implica la posibilidad de que se prive de efectos al laudo y que, incluso, se decida absolver a la enjuiciada. En tales condiciones, el presupuesto necesario para la operancia de la nulidad (la existencia de un derecho), propiamente no se configura, lo que se corrobora aún más si en el convenio cuya nulidad se pide las partes hacen constar que lo celebran para evitar la eventualidad de recibir un perjuicio mayor, o bien, que en función de lo pactado la patronal desiste del juicio de amparo directo promovido, o alguna otra cuestión similar que ponga de manifiesto que ese acuerdo de voluntades se lleva a cabo ante la posibilidad de obtener un fallo desfavorable, al resolverse el juicio de amparo directo." (Registro digital: 167852. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 2033)

CUARTO.—**Existencia de la contradicción de tesis.** A fin de verificar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada, se debe tomar en cuenta el criterio del Tribunal Pleno surgido por el sistema de reiteración, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."[2]

Conforme al criterio anterior, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

---

[2] Registro digital: 164120. Jurisprudencia P./J. 72/2010. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, agosto 2010, página 7.

Ahora bien, del análisis de los antecedentes y resoluciones reseñados y transcritos en el considerando precedente, se llega a la conclusión de que sí existe la contradicción de criterios denunciada.

Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron sus pronunciamientos en asuntos con elementos coincidentes, a saber:

a) Se promovió juicio laboral en el que se demandó la reinstalación con motivo de despido injustificado.

b) Se dictó laudo condenatorio en cuanto a la reinstalación.

c) Estando pendiente de cumplimiento el laudo condenatorio, la parte demandada promovió juicio de amparo. En un caso, la demandada promovió juicio de amparo directo. En el otro, después de que le fue desfavorable la ejecutoria del amparo directo contra el laudo, la demandada promovió incidente de no acatamiento de laudo, y en contra de la interlocutoria correspondiente en que se cuantificó la indemnización procedente, todas las partes promovieron sendos juicios de amparo indirecto.

d) Antes de que se resolviera el juicio de amparo directo en el primer caso, y el amparo indirecto en el otro, las partes celebraron convenio, el cual ratificaron ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, quien emitió su aprobación y determinó tener por cumplidos los laudos correspondientes.

e) Aprobados los convenios por la Junta, la parte demandada desistió del juicio de amparo directo en un caso, y en el otro, el Juez sobreseyó en los juicios de amparo indirecto por cambio de situación jurídica.

f) Posteriormente, los actores promovieron juicios laborales en los que demandaron la nulidad de los convenios celebrados y aprobados ante la Junta, dado que en ellos existía renuncia de derechos.

g) La parte demandada hizo valer, entre otras cuestiones, que las resoluciones laborales, laudo o interlocutoria de no acatamiento de laudo no se encontraban firmes, en atención al amparo intentado en contra de ellas, y por esa razón los acuerdos de voluntades podían apartarse del contenido de tales resoluciones; además de que la celebración de dichos convenios motivó el sobreseimiento en los juicios de amparo.

En los asuntos con los precisados elementos coincidentes, ambos Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a las siguientes conclusiones:

El **Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito** desestimó la alegación de la parte demandada en el sentido de que no existía renuncia de derechos porque cuando se celebró el convenio cuya nulidad se impugnó, la interlocutoria del incidente de acatamiento, donde se liquidó el adeudo, había sido impugnada en amparo indirecto, el cual estaba pendiente de resolución.

Consideró que la irrenunciabilidad de derechos y la posibilidad de demandar la nulidad de convenio no están condicionadas a que exista previamente un laudo inmodificable, ni a que esté pendiente de dirimirse algún amparo directo, ni están sujetas al fin que se propongan las partes al celebrar convenio: evitar mayores dilaciones, o eventuales riesgos o perjuicios en torno a las prestaciones obtenidas.

Asimismo, estableció que los derechos laborales existen una vez que en la realidad se actualizan los hechos descritos en el enunciado normativo que los prevé. El pronunciamiento jurisdiccional (laudo) declara si ocurrió dicha actualización del derecho con base en los hechos debatidos; y tal fallo vale desde el momento en que se aprueba por el órgano de justicia laboral, y sólo la sentencia de amparo que conceda la protección constitucional puede afectar su validez jurídica, pero no la sola promoción del amparo directo.

En cambio, el **Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito** consideró que no existía renuncia de derechos en los convenios en los que los trabajadores aceptaron dar por terminada la relación laboral a cambio del pago del ochenta por ciento de la cantidad prevista en el contrato colectivo de trabajo correspondiente para los casos de despido injustificado, a pesar de que en el laudo se hubiera condenado a la reinstalación, dado que éste había sido impugnado mediante un juicio de amparo directo que estaba pendiente de resolución al celebrarse los referidos convenios.

Sostuvo que la determinación de la Junta responsable en cuanto a la condena se encontraba sub júdice en función del juicio de amparo, con la posible consecuencia de que, de resolverse favorablemente a la entonces quejosa, la condena decretada quedara sin efectos, y entonces el derecho de los actores a recibir el pago de las prestaciones reclamadas y las contenidas en el contrato colectivo de trabajo desapareciera. Determinó que la condena emitida por la Junta no constituía ningún derecho firme a favor de los actores.

Así, concluyó que en ese supuesto, las partes pueden válidamente celebrar un convenio en el que, por un lado, decidan concluir la relación laboral

en términos de lo dispuesto por el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; y por otro, pacten el pago de las prestaciones materia de la condena, aunque en términos cuantitativa o cualitativamente distintos o incluso inferiores a los que prevé la ley o el contrato de trabajo. Sostuvo que en ese caso las partes pueden liquidar prestaciones, cuyo monto se considere incierto, sin que sea óbice que esa cantidad sea menor a la que haya sido condenada la parte patronal en el laudo, o a la que se calcule en el respectivo incidente de liquidación.

Por lo expuesto, se considera que sí existe la contradicción denunciada, pues los órganos colegiados analizaron el mismo problema jurídico y adoptaron criterios discrepantes.

En ese sentido, la materia de la presente contradicción consiste en determinar si es procedente el análisis de fondo de la nulidad del convenio aprobado por la Junta con posterioridad a la emisión del laudo cuando se alega renuncia de derechos derivada de la no conformidad del acuerdo de voluntades con la condena del laudo o su liquidación, cuando aquél se aprobó antes de que se resolviera el juicio de amparo intentado en contra de dichas resoluciones y éste fue sobreseído como consecuencia de la celebración de dicho convenio o del desistimiento motivado por este último, o bien, si en ese supuesto, tal análisis resulta improcedente porque no puede existir renuncia de derechos que conduzca a la nulidad del convenio, dado que en el momento de su celebración existía la posibilidad de que las prestaciones laudadas o liquidadas fueran revocadas o modificadas con motivo de la sentencia que se llegare a emitir en el amparo.

Cabe aclarar que la materia de esta contradicción se circunscribe a la procedencia de revisar la conformidad del convenio con el laudo o interlocutoria en que se liquidan las prestaciones laudadas que fueron materia de impugnación en un juicio de amparo pendiente de resolución, pero no abarca la determinación sobre si efectivamente existe renuncia de derechos, dada la divergencia de los hechos en que se basaron las respectivas acciones de nulidad. En un caso, en el laudo reclamado se condenó a la reinstalación, y se pactó el pago de una indemnización a cambio de terminar la relación laboral. En el otro, la resolución reclamada es una interlocutoria de no acatamiento del laudo, y en el convenio el trabajador dio por satisfecha la condena del laudo con la aceptación de un pago incierto, en cuanto a su monto y circunstancias de realización, y la entrega de un cheque por cantidad determinada, la cual es inferior a la liquidada en la interlocutoria; además de que en ese caso, el Tribunal Colegiado de Circuito no emitió pronunciamiento definitivo

sobre la nulidad del convenio, sino que únicamente dio lineamientos a la Junta responsable para que efectuara tal análisis de fondo.

QUINTO.—**Estudio de fondo.** Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que se exponen a continuación:

Previamente, se precisa que los convenios objeto de los criterios contendientes fueron celebrados con anterioridad al inicio de vigencia de la reforma a diversos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, mediante decreto publicado el treinta de noviembre de dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación, por lo que el análisis de esta contradicción de tesis se realizará conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a las reformas mencionadas.

Con el propósito de abordar la cuestión planteada en la presente contradicción de tesis, debe tomarse en cuenta que los criterios se emitieron con motivo de juicios laborales en los que se demandó la nulidad de convenios ratificados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes los aprobaron y, como consecuencia, tuvieron por cumplidos los laudos dictados en otros juicios. Por tanto, como primera cuestión, debe dilucidarse la procedencia de la acción de nulidad intentada contra los convenios sancionados ante las Juntas.

Pues bien, la Ley Federal del Trabajo regula la celebración de convenios ante la autoridad laboral, a fin de evitar o concluir una controversia laboral. Tales normas generales dan cumplimiento al mandato del artículo 17, párrafo cuarto, de la Constitución Federal[3] en el sentido de que en las leyes se deben prever mecanismos alternativos de solución de controversias.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la negociación ha sido reconocida como un elemento relevante en el desarrollo de las relaciones colectivas e individuales de trabajo. Preciso es reconocer que en la materia laboral, las alternativas a la solución contenciosa de los conflictos, como la conciliación o mediación, pueden ser más eficaces para acercar posiciones, sobre todo a fin de evitar que la situación permanente en la empresa sea la confrontación entre un perdedor y un ganador de un litigio judicial, que finalmente se traduzca en la paralización o merma del sistema productivo.

---

[3] "Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial."

Para la eficacia de tales medios alternativos de solución de controversias resulta necesario que las leyes aseguren estabilidad del resultado de tales medios, sin que las partes puedan desconocerlos posteriormente, en perjuicio de la certeza y seguridad jurídica, reviviendo el conflicto que ya fue solucionado en un medio distinto al juicio, reconocido y garantizado por la propia Constitución y las leyes.

Además de la seguridad jurídica y de la eficacia de los medios alternativos de solución de controversias, en la aplicación de la legislación que regula la negociación y la conciliación en materia laboral, no se puede desconocer que el derecho del trabajo tiene como punto de partida la situación de desigualdad en que se encuentran los factores de la producción, y se aparta históricamente del derecho privado o de una concepción puramente económica de las relaciones de trabajo, a fin de proteger a los trabajadores. Tales finalidades se advierten con claridad en los artículos 2o., 3o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo texto vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil doce es el siguiente:

"Artículo 2o. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones."

"Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.

"No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.

(Reformado [N. de E. adicionado], D.O.F. 28 de abril de 1978)
"Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores."

"Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador."

De esta forma, en la aplicación de las normas laborales que regulan la negociación y conciliación debe tomarse en cuenta el riesgo que subsiste en los medios alternativos de solución de controversias, derivado de la disparidad económico-social de las partes, y debe considerarse el fin de las normas protectoras que tienden a evitar tal riesgo.

En el ordenamiento jurídico mexicano, los convenios en materia de trabajo se sancionan con nulidad cuando tienen los vicios graves enunciados por el Constituyente en el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Federal, cuyo contenido es el siguiente:

"XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:

"a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.

"b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

"c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.

"d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.

"e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.

"f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.

"g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra.

"h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores."

Estas limitaciones también se encuentran previstas en el artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se dispone:

"Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

"I. Trabajos para niños menores de catorce años;

"II. Una jornada mayor que la permitida por esta ley;

"III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1974)
"IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años;

"V. Un salario inferior al mínimo;

"VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

"VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros;

"VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;

"IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado;

"X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;

"XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;

(Reformada, D.O.F. 31 de diciembre de 1974)
"XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciséis años; y

"XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.

"En todos estos casos se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas."

Otras disposiciones que contienen limitaciones a los acuerdos de voluntades en materia de trabajo son las siguientes:

"Artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula."

"Artículo 99. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados."

"Artículo 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé."

Artículo transitorio del decreto de aprobación de la Ley Federal del Trabajo

"Artículo 3o. Los contratos de trabajo individuales o colectivos que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadores, inferiores a los que les concede esta ley, no producirán en lo sucesivo efecto legal, entendiéndose sustituidas las cláusulas respectivas por las que establece esta ley.

"Los contratos de trabajo individuales o colectivos o los convenios que establezcan derechos, beneficios o prerrogativas en favor de los trabajadores, superiores a los que esta ley les concede, continuarán surtiendo efectos."

Por otra parte, en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo se establece:

"Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

"Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores."

Esta disposición se encuentra inserta en el capítulo primero de las disposiciones generales del título segundo, correspondiente a las relaciones individuales de trabajo, sin que exista precepto que excluya su aplicación a

los diversos actos jurídicos con los cuales las partes dan por concluida la relación de trabajo, o bien, pactan la solución de un diferendo respecto al alcance y cumplimiento de las prestaciones derivadas de aquélla, con independencia del momento procesal en que se celebren.

Al resolver la contradicción de tesis 90/2003-SS el tres de octubre de dos mil tres, esta Segunda Sala interpretó el transcrito artículo 33 y, para ello, precisó que los convenios son instrumentos útiles para hallar una solución conciliatoria a un conflicto, ya sea en el curso del procedimiento, correspondiente a la conciliación procesal, o para evitar el litigio mediante los acuerdos fuera del juicio, pero para su validez deben ser ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y aprobados por ésta en términos del artículo 33 citado.

También se precisó que, por liquidación se entiende el medio por el cual se puede disolver o poner fin a la relación laboral o al contrato de trabajo, y también puede ser la operación mediante la cual se detalla y ordena el pago de las prestaciones a que tiene derecho un trabajador al darse por concluida definitivamente su relación laboral.

Otro concepto definido en dicha resolución es el de finiquito, que es el acto mediante el cual un patrón otorga a un trabajador las prestaciones a que éste tiene derecho en términos de ley, para dar por terminada la relación laboral que los unía. Asimismo, se estableció que el finiquito liberatorio para ser válido debe contener una relación específica de los conceptos pagados al trabajador y los periodos respectivos, esto es, en él se deben hacer constar las prestaciones y cantidades que, por medio de él se cubren al trabajador una vez concluido el nexo laboral, motivo por el cual debe cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.

Como consecuencia, se sostuvo que en la celebración de los convenios, liquidaciones o finiquitos debe imperar el principio de irrenunciabilidad, dado el carácter tutelar del derecho del trabajo, objetivo que justifica la exigencia de los requisitos necesarios para la validez de dichos actos derivados de lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 33 transcrito. Todas estas consideraciones sirven de marco y sustento para la solución de este asunto.

Por otro lado, debe tomarse en consideración que en la Ley Federal del Trabajo, se regulan diversos procedimientos a fin de que las partes ratifiquen los convenios que celebren ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y obtengan

de ésta su aprobación, en cuya aplicación se toma en cuenta el momento procesal en que ocurra su celebración.

Si el convenio se celebra sin que se haya presentado demanda laboral alguna, deberá ser ratificado y aprobado por el tribunal laboral en el procedimiento paraprocesal establecido en el artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce prevé:

"Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación, de Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla.

"En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo, deberá desglosarse la cantidad que se le entregue al trabajador por concepto de participación de utilidades. En caso de que la comisión mixta aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual."

Cabe destacar que en el segundo párrafo de este artículo se prescribe como requisito de los convenios en los que se da por terminada la relación de trabajo que contengan un desglose de la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de participación de utilidades.

Después de presentada la demanda, la aprobación del convenio se regula como parte de la conciliación, prevista en el artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, que en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, tenía el contenido siguiente:

(Reformado y reubicado, D.O.F. 4 de enero de 1980)
"Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:

"I. Las partes comparecerán personalmente a la Junta, sin abogados patronos, asesores o apoderados.

"II. La Junta intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio.

"III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo;

"IV. Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la audiencia con objeto de conciliarse; y la Junta, por una sola vez, la suspenderá y fijará su reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes de la nueva fecha con los apercibimientos de ley;

"V. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a la etapa de demanda y excepciones; y

"VI. De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y excepciones."

Conforme a este precepto, se prevé una etapa de conciliación inicial previa a la exposición de la demanda y las excepciones, y previene que, de aprobarse el convenio, se dará por terminado el conflicto y dicho pacto producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo

Por último, si ya se dictó el laudo, el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma de dos mil doce, autoriza a las partes a acordar las modalidades de cumplimiento, conforme a lo siguiente:

"Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación.

"Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento."

Estas disposiciones establecen normas procesales que permiten a las partes celebrar convenios para prevenir o terminar conflictos, en cualquier etapa del procedimiento, en los cuales debe asegurarse una solución duradera y estable, pero también la protección de los derechos de los trabajadores.

Conforme a lo expuesto, se advierte que en el ordenamiento jurídico no sólo se enuncian las limitaciones al contenido de los convenios, liquidaciones o finiquitos, establecidas en los artículos 123, apartado A, fracción XXII, constitucional, 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo, sino que también se prevé como garantía de protección de los trabajadores, requisitos y procedimientos que deben observarse y seguirse ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

De estas medidas, destacan los requisitos previstos en el segundo párrafo del artículo 33 citado, los cuales, según se expuso, resultan aplicables a todos los convenios, liquidaciones y finiquitos, y son los siguientes:

* Constar por escrito.

* Contener una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto.

* Ser ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva.

* Ser aprobados por la Junta cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores, para lo cual debe solicitar del trabajador y del patrón las explicaciones o aclaraciones que considere necesarias.

En ese sentido, la ley laboral exige para la validez de los convenios no sólo que consten por escrito, que tengan determinado contenido, sino que además sean ratificados ante la Junta y que sean aprobados por ésta, la cual deberá verificar que no exista renuncia de derechos.

Por lo anterior, es claro que el acuerdo entre las partes que no haya sido sometido a la aprobación de la Junta, o que haya sido rechazado por ésta, no es válido, por lo que podrá plantearse su nulidad por no cumplir con lo establecido en el citado artículo 33. En ese supuesto, no está demostrado que efectivamente existió consentimiento del trabajador, y que el contenido del pacto no contiene renuncia de derechos en su perjuicio, al tratarse de un convenio que no se celebró en la forma y conforme a los procedimientos de tutela de los derechos de los trabajadores.

En cambio, en los casos en que los convenios fueron ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y han sido aprobados por ésta, hay un pronunciamiento del órgano competente en el sentido de que las partes (entre ellas el trabajador) ratificaron el acuerdo de voluntades ante ella, y que el órgano jurisdiccional aprobó su contenido, al no contener renuncia de derechos. A continuación, se dilucidará si a pesar de existir tal aprobación judicial en resolución firme, resulta procedente la acción de nulidad.

Para analizar tal cuestión, debe tomarse en consideración lo resuelto por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 146/2008-SS, en la sesión de veintiséis de noviembre de dos mil ocho.

En la resolución correspondiente a la citada contradicción de tesis, se sostuvo que en materia de nulidades, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado la teoría tripartita que distingue entre inexistencia, nulidad absoluta y nulidad relativa, y ha adoptado el criterio de que la diferencia entre las dos primeras es meramente teórica. A pesar de ello, ha considerado que, por regla general, ambas (inexistencia y nulidad absoluta) deben ser declaradas por la autoridad jurisdiccional competente, salvo en la materia agraria, en que la propia ley se ha encargado de hablar de inexistencias.

Asimismo, se precisó que en la materia laboral no se califica de inexistentes a los actos o convenios que contengan renuncia de derechos establecidos a favor de la clase obrera, pues la citada norma constitucional establece que serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato, no solamente aquellas que específicamente señala la propia disposición, sino todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores. También se destacó que el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia a la nulidad.

Como apoyo de tal determinación, se invocó lo resuelto por esta Segunda Sala, en el amparo directo en revisión 1180/2008, el tres de septiembre de dos mil ocho, por mayoría de tres votos. En esta última ejecutoria, se estableció que las menciones específicas que hace la fracción XXVII, inciso e), apartado A, del artículo 123 de la Constitución, se refieren a los derechos que se sustentan en principios de orden público, fijando con precisión los que corresponden en sus relaciones contractuales contra el capital, y que si se contravienen tales principios, ello provoca una nulidad que impide producir efecto alguno al contrato y, por ende, que sea susceptible de valer aun con el consentimiento del trabajador.

Asimismo, en dicho precedente se consideró que la nulidad de condiciones es una sanción implementada por el Constituyente basada en el principio de proteger los derechos de los trabajadores en su salario y evitar que sean coaccionados para aceptarlo con motivo de su vulnerabilidad frente al patrón, con estipulaciones que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados; de tal suerte que si el trabajador que firma un convenio aceptando condiciones nulas, éste será inválido. Sin embargo, se determinó que aun cuando el precepto constitucional establece la sanción de nulidad sobre lo pactado por los contrayentes, para que la nulidad pueda surtir sus efectos, requiere que la autoridad jurisdiccional realice ese pronunciamiento. Con base en esas consideraciones, se concluyó que no es necesario el ejercicio de la acción de nulidad para

declarar nulas e inaplicar las condiciones pactadas que sean contrarias a la mencionada porción normativa constitucional.

En la resolución de la contradicción de tesis 146/2008-SS, también se citaron los comentarios a la fracción XXVII, apartado A, del artículo 123 de la Constitución expresados por la profesora Patricia Kurczyn Villalobos:

"La autonomía del derecho del trabajo obliga a considerar la nulidad en materia de trabajo bajo criterios jurídicos distintos a los civilistas. El Texto Constitucional se refiere concretamente a nulidades en derecho sustantivo que se vinculan en alteraciones a los principios y a los derechos fundamentales en materia laboral. La nulidad también se utiliza para cancelar actuaciones procesales hechas en contra de la ley. La terminología de nulidad, como la inexistencia de la huelga, se toma del léxico jurídico común pero no debe vincularse a los principios teóricos del derecho civil. La nulidad en materia laboral es una sanción paralela a la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.

"Si bien, la redacción de la fracción que se comenta se refiere a la no obligatoriedad de las partes de ciertas condiciones pactadas en los contratos, en realidad se refiere exclusivamente a los trabajadores, a quienes se libera de obligaciones contraídas que contrarían las normas laborales o de seguridad social.

"El contrato de trabajo no es una institución formal y menos solemne, razón por la cual, su omisión no genera responsabilidad alguna para el trabajador y, debe suplirse con las condiciones que estipule la legislación laboral, incluidos los convenios y tratados internacionales ratificados. No hay, por tanto, condiciones o requisitos de validez y existencia que deriven en nulidades relativas o absolutas. El tema de las nulidades en materia laboral se aborda con claridad por el maestro Néstor de Buen, quien destaca que la nulidad laboral deriva del interés público de las disposiciones, como lo expresa la misma ley. Con este sustento, la nulidad en el derecho laboral se vincula con las prohibiciones que la legislación establece. De Buen señala que el principio de nulidad absoluta e inexistencia se determina en el artículo 5o. de la LFT al enunciar que no producen efectos legales las estipulaciones que establezcan las condiciones que enumera. Sin embargo, sí se producen efectos legales toda vez que los actos nulos generan a favor de los trabajadores el cumplimiento de sus derechos ya devengados, como el salario, vacaciones, aguinaldo u otros que les correspondan de acuerdo con las estipulaciones legales. Otra característica de la nulidad laboral es que no es necesario que medie declaración alguna sobre el particular, esto es, que la suplencia de las cláusulas nulas opera de pleno derecho.

"La nulidad de condiciones es una sanción de la legislación laboral basada en el principio de la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores, que se impone obligatoriamente con el propósito de evitar que los trabajadores sean coaccionados para aceptarlo con motivo de su vulnerabilidad frente al patrón. De tal suerte, el trabajador que firme un convenio aceptando condiciones nulas será inválido sin necesidad de promociones o declaraciones ante y por autoridad alguna. Por ello, los convenios por los que se den por rescindidas o terminadas las relaciones de trabajo siempre deberán ser ratificadas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

"Las menciones específicas que hace la fracción XXVII se refieren a los derechos básicos que se sustentan en principios universales que igual corresponden a los derechos humanos de primera y segunda generación de los trabajadores que declara y protege el artículo 123 en todo su contenido. En materia procesal la nulidad de las actuaciones procede mediante el incidente que se interponga durante el juicio laboral; es nulo, por ejemplo, todo lo actuado ante Junta incompetente con excepciones y son nulas las notificaciones hechas en contra de lo dispuesto en la LFT."[4]

Con base en el precedente citado y en la opinión doctrinal transcrita, en la resolución de la contradicción de tesis se expusieron las siguientes conclusiones:

"• En lo concerniente al proceso legislativo de la fracción XXVII del apartado A del artículo 123 constitucional, puede observarse que el constituyente no distinguió si la previsión ahí mencionada requería de un ejercicio para considerar nulas las condiciones.

"• Las menciones específicas que hace la fracción XXVII apartado A del artículo 123 de la Constitución, se refieren a los derechos que se sustentan en principios de orden público, fijando con precisión los que corresponden en sus relaciones contractuales contra el capital, y que si se contravienen tales principios, provoca una nulidad que impide producir efecto alguno al contrato y, por ende, que sea susceptible de valer aun con el consentimiento del trabajador.

"• No obstante que el precepto constitucional determina la sanción de nulidad, sobre lo pactado por los contrayentes, para que pueda surtir sus efectos, requiere que la autoridad jurisdiccional realice ese pronunciamiento.

---

[4] *Derechos del pueblo mexicano*, séptima edición, México, editorial Miguel Ángel Porrúa, 2006, tomo XX, páginas 469 y 470.

"• Lo anterior significa, que aun cuando el trabajador no solicite la nulidad de las condiciones estipuladas por los contratantes, en vía de acción, desde el momento en que en un procedimiento se encuentre en pugna tal pacto y el órgano jurisdiccional tiene conocimiento de que su impugnación deriva de la contravención a los derechos fundamentales, la autoridad jurisdiccional puede decretar su nulidad, aunque no se solicite en vía de acción, pues en nuestro sistema jurídico los actos afectados de nulidad absoluta producen siempre sus efectos provisionalmente, mientras no se haga la declaratoria correspondiente por la autoridad competente, consignada expresamente en la ley, lo que implica que la nulidad deba ser declarada judicialmente.

"• En cualquier caso en que se someta al conocimiento de la autoridad jurisdiccional la nulidad de un convenio pactado en contravención al artículo 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución, la autoridad debe hacer la declaración de oficio o a petición de cualquiera de las partes; pues dicha Norma Fundamental tiene por efecto anular todas las condiciones pactadas y no obligarán a los contrayentes aunque se expresen en el pacto, aquellas que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados."

Así, en dicha resolución se concluyó que en materia laboral, las menciones específicas que hace la fracción XXVII, apartado A, del artículo 123 de la Constitución, se refieren a derechos que se sustentan en principios de orden público. No obstante que el precepto constitucional determina la sanción de nulidad sobre lo pactado por los contrayentes, para que pueda surtir sus efectos, opera la regla general de que la autoridad jurisdiccional realice ese pronunciamiento. Por tanto, se sostuvo que cuando se someta al conocimiento de la autoridad jurisdiccional (Juntas de Conciliación y Arbitraje) la nulidad de un convenio pactado en contravención al artículo 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución, esa autoridad debe hacer la declaración de oficio o a petición de cualquiera de las partes.

También se determinó que si la parte interesada no plantea la invalidez en vía de acción o de excepción y, por otro lado, la autoridad jurisdiccional tampoco se pronuncia oficiosamente al respecto, entonces el tribunal de amparo, en su caso, deberá hacerlo cuando sea la parte obrera la quejosa, por aplicación directa de la Constitución y en suplencia de la queja.

Con motivo de la resolución de la contradicción de tesis 146/2008-SS, se aprobó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 195/2008, publicada con el rubro y texto siguientes:

"CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.—Las menciones específicas contenidas en la citada fracción se refieren a derechos sustentados en principios de orden público; por tanto, cuando en un juicio laboral se ventilen cuestiones relacionadas con algún convenio sancionado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, pactado en contravención al artículo 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad que conoce del asunto debe hacer la declaración o reconocimiento de nulidad respectivo, por vía de acción o de excepción, o bien, de oficio, por aplicación directa de la Ley Suprema. Asimismo, si esa nulidad no fuere planteada y la autoridad jurisdiccional no se pronunciare oficiosamente al respecto, entonces deberá hacerlo el órgano de amparo, cuando sea la parte obrera la quejosa, también por aplicación directa de la Constitución y en suplencia de la queja. Lo anterior no riñe con el criterio sustentado en la tesis 2a./J. 162/2006, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 197, de rubro: 'CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO JUICIO.', en razón de que aborda un tema distinto, como lo es la vía idónea para demandar la nulidad de un convenio celebrado entre las partes en un juicio laboral para dar por terminado el conflicto, y aprobado por la Junta, en términos de los artículos 33 y 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, el cual no se identifica con el criterio antes especificado."[5]

Asimismo, en la resolución de la contradicción de tesis 397/2009, esta Segunda Sala aprobó la jurisprudencia 2a./J. 1/2010, de rubro y texto siguientes:

"TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la causa de terminación de la relación laboral prevista en el artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, con-

[5] Registro digital: 168169. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, enero de 2009, página 608.

sistente en el mutuo consentimiento de las partes, es el acuerdo de voluntades de las partes trabajadora y patronal libremente expresado, es decir, sin coacción alguna, para extinguir o dar por terminado el contrato o relación de trabajo, ya sea por tiempo fijo o indeterminado. No obstante, el precepto citado debe interpretarse en forma relacionada con el diverso numeral 33 de la propia Ley, en el sentido de que la terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento no implica que el trabajador esté imposibilitado para solicitar la nulidad del convenio celebrado con el patrón, por concepto de finiquito o liquidación, si considera que en él existe renuncia a sus derechos, independientemente de que el propio convenio haya sido ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior es así, en razón de que la causal de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, en sí misma considerada, si bien es cierto que tiene por efecto concluir por acuerdo de voluntades el contrato de trabajo, también lo es que ello no implica renunciar a los derechos o prestaciones devengados o que propiamente deriven de los servicios prestados, así como los que, en su caso, se hayan pactado en el contrato individual o colectivo para el caso de terminación de la relación laboral, pues el referido artículo 33, al estar inserto en el capítulo de las disposiciones generales del título relativo a las relaciones individuales de trabajo y contener el principio de irrenunciabilidad en los convenios o liquidaciones que impera en el derecho del trabajo, debe considerarse aplicable para los casos en que termine la relación de trabajo por mutuo consentimiento, ya que no hace distinción alguna en ese sentido. Por los motivos anteriores, la Segunda Sala se aparta de las razones expuestas en la tesis de la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volumen 55, Quinta Parte, página 15, con el rubro: 'CONVENIO DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN LABORAL. EFECTOS.'."[6]

Al resolver la contradicción de tesis 113/2006-SS, esta Segunda Sala precisó la vía en que debe demandarse la nulidad de un convenio laboral celebrado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y emitió la jurisprudencia 2a./J. 162/2006, que es del tenor siguiente:

"CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO JUICIO.—Si bien el convenio a que alude el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo produce los

[6] Registro digital: 165373. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 316.

mismos efectos jurídicos que un laudo, en tanto pone fin al conflicto, de la interpretación de la mencionada disposición legal en relación con los artículos 837, fracción III, 838 a 842 de la propia legislación, se advierte que el convenio y el laudo son actos jurídicos distintos, pues el primero consiste en un acuerdo de las partes celebrado por escrito en el juicio laboral para dar por terminado el conflicto, el cual debe aprobarlo la Junta, quien actúa como simple sancionadora de la voluntad de aquéllas, sin que valore pruebas ni decida sobre la litis planteada; mientras que el segundo es un acto jurisdiccional que decide el fondo de la controversia mediante la valoración de pruebas y apreciación de los hechos. En ese sentido, se concluye que el medio apto para promover la nulidad del convenio referido, cuando alguna de las partes estime que contiene renuncia de derechos de los trabajadores o que adolece de algún vicio de validez en términos del artículo 33 de la ley indicada, es un nuevo juicio ante la Junta que conoció y aprobó el acuerdo, pues conforme a los numerales 604 y 621 de la citada normatividad corresponde a las Juntas Locales o a la Federal de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones, supuesto en el que encuadra la controversia referida."[7]

El mismo criterio en el sentido de que es procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje sirvió de premisa para sustentar la jurisprudencia 2a./J. 105/2003 de esta Segunda Sala, que dice:

"ANTIGÜEDAD GENÉRICA. LA ACCIÓN PARA COMBATIR SU RECONOCIMIENTO EN UN CONVENIO CELEBRADO POR LAS PARTES Y SANCIONADO POR LA JUNTA CORRESPONDIENTE, ESTÁ SUJETA AL PLAZO PRESCRIPTIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.—Conforme al artículo 876, fracción III, del citado ordenamiento, las partes en un conflicto pueden celebrar un convenio que, una vez autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, producirá todos los efectos inherentes a un laudo, por lo que la existencia de ese convenio pone de manifiesto que las partes contendientes han llegado a un arreglo sobre sus respectivas pretensiones, de manera que mientras no se declare su nulidad, lo plasmado en él debe estimarse ajustado a la realidad. En consecuencia, si el trabajador considera que el reconocimiento de la antigüedad en el convenio respectivo es incorrecto, deberá promover su nulidad, acción que tendrá que ejercer dentro del plazo de un año, ya que de lo contrario aquélla prescribirá confor-

[7] Registro digital: 173799. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 197.

me a la regla general prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a lo antes expuesto, es importante señalar que si en el mencionado convenio se precisa la antigüedad del trabajador, esta declaratoria autorizada por la Junta correspondiente surte sus efectos en el mundo jurídico mientras no se declare su nulidad, de manera que no es válido, ni procedente que el trabajador intente promover, por separado y con posterioridad, la acción de reconocimiento de antigüedad, pues además de que ello podría dar lugar a una resolución en la que se reconociera una antigüedad distinta, lo que estaría en contradicción con lo plasmado en el referido acuerdo de voluntades, implicaría admitir la posibilidad de que dicho trabajador pudiera en una vía distinta retractarse en cualquier momento, incluso años después, de lo establecido en el convenio aludido, en el cual expresó su voluntad, evento que, por una parte, afectaría la seguridad jurídica de las partes y, por otra, desnaturalizaría dicho convenio, cuya existencia implica la sujeción a un procedimiento establecido en la ley, particularmente la referida fracción III del artículo 876, así como la certeza de que los suscriptores del convenio, específicamente el trabajador, han manifestado su voluntad y, por ende, tienen cabal conocimiento de los términos pactados, con lo cual se garantiza su derecho de defensa en caso de inconformidad."[8]

Aun cuando se siguen sosteniendo las consideraciones reseñadas de la contradicción de tesis 146/2008-SS, respecto al tipo de nulidad previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, constitucional, una nueva reflexión conduce a abandonar la tesis de jurisprudencia emitida, al resolver tal contradicción de criterios, así como las tres últimas tesis transcritas, en la medida en que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, en los términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.

En efecto, como ya se expuso al reseñar la resolución de la contradicción de tesis 146/2008-SS, se estima que las cláusulas que desconozcan lo establecido en los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Federal y 5o. de la Ley Federal del Trabajo son nulas de pleno de derecho. Así, deben ser declaradas por la autoridad jurisdiccional, y en sustitución de tales cláusulas debe observarse lo dispuesto en las normas supletorias protectoras de los trabajadores, respecto a las condiciones que deben regir hacia el futuro la relación de trabajo. En ese supuesto, es innecesaria la acción de nulidad, pues las cláusulas del convenio en las que se pacten con-

[8] Registro digital: 182890. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 134.

diciones contrarias a las prohibiciones constitucionales se tendrán por no puestas y no vinculan a las partes en el desarrollo de la relación de trabajo o en la determinación futura de las prestaciones derivadas de ésta, sin que su estipulación pueda causar perjuicio a los trabajadores.

Consecuentemente, en caso de un conflicto derivado de la aplicación de las cláusulas de un contrato o convenio que vulnere alguna de esas prohibiciones, la autoridad judicial, sea ordinaria o de amparo, debe preferir la aplicación de las normas generales tutelares de los trabajadores, con independencia de lo estipulado en el contrato o convenio. Por ejemplo, deben tenerse por no puestas las condiciones que se traduzcan en un salario inferior al mínimo, una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o la autorización de horas extraordinarias para menores de dieciséis años de edad.

Ahora bien, si lo que se demanda es la nulidad del convenio por considerar que en él se narraron hechos falsos, que existe renuncia de derechos respecto de salarios, indemnizaciones u otras prestaciones devengadas o adeudadas, y ese cuestionamiento tiende a impugnar la determinación de la Junta de Conciliación y Arbitraje, al aprobar el convenio, la acción de nulidad es improcedente, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones que fueron materia de dicho pronunciamiento.

En este caso, no se trata de la nulidad de pleno derecho de cláusulas que establecen condiciones de trabajo, sino que el cuestionamiento de validez se relaciona con declaraciones y cláusulas que se refieren a hechos y prestaciones devengadas o adeudadas, que ya fueron admitidos por las partes al ratificar el convenio, cuya legalidad debe ser verificada por la Junta, al aprobar el convenio, de manera que ni dicho órgano jurisdiccional ni las partes pueden desconocer lo ya admitido y aprobado conforme al artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo.

Según se demostró, el citado artículo 33 estableció el procedimiento idóneo para que la autoridad judicial laboral verifique que en los convenios celebrados en esta materia no existe renuncia de derechos, con el fin de tutelar a los trabajadores, pero también para dotar de certeza y estabilidad a lo pactado. Tal precepto, se insiste, es aplicable a todos los convenios en materia de trabajo, con independencia del momento procesal en que se celebren.

Por consiguiente, una vez que hay pronunciamiento de la Junta en el sentido de que en el convenio no existe renuncia de derechos, después de haber verificado su contenido y lo expuesto en la audiencia de su ratificación, debe tenerse como una resolución firme, por lo que ya no es posible que sea

revocada ni modificada en un juicio posterior, en el que se pretende cuestionar lo que fue materia de verificación por la Junta al aprobar el convenio, salvo la posibilidad que existe de su impugnación por medio del juicio de amparo, sea indirecto o directo. Al respecto, debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo,[9] en el sentido de que las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones.

En apoyo de lo anterior, debe considerarse que si un convenio reúne los requisitos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, y así lo determina la Junta laboral al aprobarlo, tanto los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y vinculan a las partes, por lo que no es procedente que con posterioridad el trabajador haga valer la nulidad del convenio aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral, en el procedimiento de garantía establecido para ese fin.

Además, de estimarse procedente el planteamiento de nulidad implicaría admitir la posibilidad de que el trabajador pudiera en una vía distinta retractarse en cualquier momento, incluso muchos años después, de lo establecido en el convenio, en el cual expresó su voluntad, situación que, por una parte, afecta la seguridad jurídica de las partes y, por otra, desnaturaliza dichos convenios, los cuales se celebran en un procedimiento específico que permite su ratificación en audiencia ante la Junta laboral, quien se encuentra obligada a verificar que no existe renuncia de derechos, y ello dota de certeza jurídica y estabilidad a lo pactado.

Tal conclusión es idónea, además, para garantizar la eficacia de los medios alternativos de solución de controversias ordenados en el artículo 17 constitucional, sin que la estabilidad resultante de respetar lo pactado y determinado en el propio procedimiento establecido por el legislador en el citado artículo 33 sea lesiva de los derechos de los trabajadores, pues no debe olvidarse que tales convenios deben ser ratificados por el propio interesado, quien podrá exponer las aclaraciones y alegaciones que estime pertinentes en la audiencia de ratificación, y en términos del mencionado precepto, la Junta está obligada a verificar que no existe renuncia de derechos. Aunado a lo anterior, al tratarse de una resolución judicial, el trabajador está en aptitud

[9] "Artículo 848. Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones.
"Las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurran los miembros de la Junta."

de impugnar ésta mediante el juicio de amparo, en la vía que resulte procedente, en el cual podrá plantear las posibles deficiencias en la actuación de la Junta.

Un supuesto distinto, como ya se expuso, es la celebración de convenios que no fueron ratificados ni sancionados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, respecto de los cuales no existe pronunciamiento firme sobre la existencia de renuncia de derechos en perjuicio del trabajo, por lo que su validez no ha sido sancionada por la autoridad laboral.

Los casos que dieron origen a esta contradicción de criterios se relacionan con el planteamiento de nulidad de convenios celebrados con posterioridad al dictado del laudo y, por tanto, se trata de acuerdos regidos por el principio de irrenunciabilidad previsto en los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, constitucional y 33 de la Ley Federal del Trabajo, que además fueron ratificados ante la Junta laboral y sancionados por ella, mediante resolución firme.

Asimismo, en los asuntos de los que deriva esta contradicción de criterios, los convenios contienen la manifestación de voluntad de los trabajadores de dar por satisfechas las prestaciones laudadas y liquidadas con las cantidades recibidas al celebrarlos, así como expresiones que revelan la intención de las partes de evitar los riesgos de la tramitación o resolución del amparo intentado por los demandados, manifestaciones que fueron ratificadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien tomando en cuenta las constancias del juicio laboral, el contenido del convenio y lo expuesto en la audiencia, determinó en resolución firme que no existía renuncia de derechos. Por tanto, ante esa situación, no es posible que las partes en un juicio posterior, se retracten de tales manifestaciones y aduzcan renuncia de derechos, desconociendo una resolución firme en perjuicio de la seguridad y certeza jurídicas.

Luego, si los trabajadores promovieron con posterioridad juicio laboral en el que adujeron que dichos convenios eran nulos porque la indemnización o liquidación en ellos pactadas resultaban inferiores a las condenas laudadas, la acción debió considerarse improcedente, en virtud de que hay determinación firme de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que no existe la renuncia de derechos aducida por el actor, sin que tal pronunciamiento pueda ser analizado nuevamente.

Dado el criterio sostenido, para la solución de este asunto es irrelevante que el laudo o resolución haya sido reclamado en amparo, y que el convenio se haya celebrado mientras el amparo se encontraba pendiente de

resolución, lo que motivó su sobreseimiento. Lo anterior es así, porque la acción de nulidad resulta improcedente, y no es posible determinar en un juicio posterior la validez o no de los convenios que ya fueron sancionados por la Junta, en determinación firme, en la que se consideró que lo pactado en ellos da cumplimiento al laudo, y que no existe la renuncia de derechos alegada en las demandas.

Conforme a las anteriores consideraciones, el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, es el siguiente:

CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta.

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en las diversas 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010, de rubros: "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. LA ACCIÓN PARA COMBATIR SU RECONOCIMIENTO EN UN CONVENIO CELEBRADO POR LAS PARTES Y SANCIONADO POR LA JUNTA CORRESPONDIENTE, ESTÁ SUJETA AL PLAZO PRESCRIPTIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", "CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO JUICIO.", "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE." y "TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.", que aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 134, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 197, Tomo XXIX, enero de 2009, página 608 y Tomo XXXI, enero de 2010, página 316, respectivamente.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del último considerando de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; remítanse la indicada jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y en *su Gaceta*, conforme al artículo 219 de la Ley de Amparo; y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas (ponente) y presidente Alberto Pérez Dayán. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra.

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo,

deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta.

2a./J. 17/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 94/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 de febrero de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis V.2o.C.T.3 L, de rubro: "RENUNCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. NO LA CONSTITUYE EL CONVENIO EN EL QUE EL TRABAJADOR ACEPTA PRESTACIONES INFERIORES A LA CONDENA IMPUESTA AL PATRÓN, SI ÉSTE IMPUGNÓ EL LAUDO RELATIVO MEDIANTE JUICIO DE AMPARO DIRECTO, Y EL ACUERDO DE VOLUNTADES SE SUSCRIBE CON EL FIN DE EVITAR RIESGOS EVENTUALES PARA LAS PARTES.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 2033, y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 590/2013.

Nota: Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*, y en virtud de que abandona los criterios sostenidos en las diversas 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010, de rubros: "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. LA ACCIÓN PARA COMBATIR SU RECONOCIMIENTO EN UN CONVENIO CELEBRADO POR LAS PARTES Y SANCIONADO POR LA JUNTA CORRESPONDIENTE, ESTÁ SUJETA AL PLAZO PRESCRIPTIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", "CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO JUICIO.", "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE." y "TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.", que aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 134, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 197, Tomo XXIX, enero de 2009, página 608 y Tomo XXXI, enero de 2010, página 316, respectivamente, estos últimos dejaron de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015.

Tesis de jurisprudencia 17/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de febrero de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997", DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 249/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, NOVENO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA Y EL ENTONCES CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 18 DE FEBRERO DE 2015. CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIO: JAIME FLORES CRUZ.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de distinto circuito en asuntos que versan sobre la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.

7. SEGUNDO.—La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que la formulan los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, uno de los tribunales que sostiene un criterio en posible contradicción.

8. TERCERO.—De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y XLVII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito **adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho**, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

9. Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador **a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia**, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre **un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios** para sustentar sus respectivas decisiones.

10. Lo anterior, se reitera, independientemente de que las **cuestiones fácticas** que lo rodean no sean exactamente iguales.

11. Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales

adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Núm. Registro digital: 164120, Instancia: Pleno, jurisprudencia, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADIC-

CIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Núm. Registro digital: 166996. Pleno. Tesis aislada. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67)

12. CUARTO.—Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

13. El **Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito (a)**, órgano colegiado que denunció la presente contradicción de tesis, al resolver los **amparos directos** ********** y **********, el trece de junio y once de julio de dos mil catorce (fojas 7 y 42 del toca), consideró, en el segundo de los asuntos citados, que es similar al primero, lo siguiente:

"QUINTO.—Los conceptos de violación que expresa **********, resultan inoperante por una parte e infundados por otra a juicio de este Tribunal Federal.

"A manera de antecedentes, conviene precisar lo siguiente:

"**1.** Mediante escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, **********, por conducto de su apoderada, acudió ante la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a demandar al ********** y **********, la devolución de la cantidad que integra su subcuenta de vivienda, que al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, ascendía a la cantidad de **********. Narró que prestó sus servicios para diversos patrones cotizando para el ********** y que el diez de enero de dos mil once, el **********, le otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada, bajo la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, sin que hubiera logrado que el **********, le hiciera la devolución de los montos acumulados en la subcuenta de vivienda.

"**2.** **********, contestó la demanda negando acción y derecho a la actora para pretender la devolución de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda, pues dijo que los recursos son administrados por el **********.

3. El **********, contestó la demanda negando derecho a la actora para obtener del instituto la devolución de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda, pues éstos se encuentran en la Afore elección de la trabajadora y que según la Ley del Seguro Social establece que los recurso de la subcuenta de vivienda deben transferirse al Gobierno Federal para solventar la pensión de la actora.

"**4.** Las partes ofrecieron pruebas y una vez desahogadas, la Junta emitió laudo de fecha treinta de enero de dos mil doce, en el que condenó al **********, a transferir los recurso de la subcuenta de la trabajadora a **********, para que ésta los entregue a la actora, junto con sus respectivos incrementos e intereses.

"Ese laudo constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. …

"Son inoperantes los argumentos propuestos, ya que por más que se hubiera incurrido en incongruencia en el laudo reclamado, al considerar parte al Instituto Mexicano del Seguro Social y al establecer que el Instituto del

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no compareció al procedimiento, cuando sí lo hizo, y así como por haber negado la solicitud el instituto de vivienda referido, de que se llamara a juicio a la Tesorería de la Federación, además de haber incurrido en omisión en la valoración de las pruebas, se estima que las incongruencias que destaca no afecta los derechos de la Afore quejosa, ya que la condena a devolver los recursos acumulados de la subcuenta de vivienda de la actora, fue hecha al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que tiene a su cargo la administración de los mismos y, a la Afore, únicamente se le conmina a la entrega de esos recursos que previamente le sean transferidos, lo que implica que no existe afectación del patrimonio que la quejosa tiene en administración.

"En efecto, dados los efectos de la condena, en el caso no puede estimarse que las razones que aduce, destaquen que se viola en contra de la Afore un derecho que le legitime para impugnar la actuación de la Junta mediante el juicio de amparo directo, ya que el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que el juicio de amparo se proponga por quien resulte afectado por un acto específico de autoridad que estima transgresor de sus derechos; es decir, que quien acude al juicio constitucional, debe ser precisamente la persona física o moral a quién afecta el acto de autoridad, toda vez que ese principio lleva imbíbita la finalidad del gobernado de controvertir el acto que le perjudica y lograr un fallo favorable, ya que de no afectarle, se produciría la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

"Por lo anterior, aunque en el caso se hubieran cometido las incongruencias, que destaca el quejoso, y otras como lo es, la cometida en el resolutivo primero del laudo, relativo al haber considerado demandada a **********, cuando en la parte considerativa, la responsable establece correctamente que se refiere a la Afore aquí quejosa, contra quien se instauró la demanda; sin embargo, no puede dejar de atenderse que la única condena que se efectuó en contra de la Afore quejosa, fue la de entregar a la actora, los recursos que le fueran transferidos por el **********, lo que no representa un perjuicio económico ni jurídico que le permita controvertir la procedencia de la acción de devolución o bien, la condena.

"Lo anterior es así, porque ningún perjuicio causa a la Afore quejosa, la condena hecha al ********** y a la propia Afore quejosa, a devolver a la actora los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda, ya que no se está condenando a la Afore de manera independiente y autónoma a la entrega de dichos recursos, sino que la entrega de los recursos, se encuentra supeditada a que el ********** realice la transferencia de los mismos.

"Por lo anterior, es evidente que al condenarse al **********, a la devolución del monto acumulado en la subcuenta de vivienda, no se produce afectación de un derecho de la Afore, ya que no tiene a su cargo el manejo ni la administración de los fondos de la subcuenta de vivienda y, por lo que hace a la condena de la entrega de esos recursos, que previamente y con ese objeto le transferirá el **********, no le confiere el derecho de argumentar en lo relativo a la procedencia de su devolución, pues las únicas intervenciones que la Afore tiene en lo que respecta a los recursos acumulados en la subcuenta de mérito, es la entrega que realiza en términos del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es previa transferencia de los recursos por parte del ********** que los administra, por lo que es evidente que la condena al **********, a la devolución de los recursos, no afecta el interés de la quejosa y la entrega de tales recurso previa transferencia que efectúe el **********, no se controvierte en este apartado.

"Es de aplicarse en el caso, por las razones que informan su contenido jurídico, la jurisprudencia 2a./J. 96/99, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 78 del Tomo X, agosto de 1999, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.' …

"En la segunda parte de su tercer concepto de violación, propone la quejosa que quien administra los recursos, es el **********, y que la quejosa, sólo fue el conducto para hacerlos llegar a los trabajadores, hasta el doce de enero de dos mil doce, es decir, hasta antes de la entrada en vigor del artículo octavo transitorio por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a partir del cual, para hacer entrega de los mismos, no es necesario que el **********, le transfiriera a la Afore tales recursos, además de que en el caso, no se dan las hipótesis establecidas en el artículo octavo transitorio de esa ley, pues los recursos no se encuentran disponibles en la cuenta individual de la actora, sino que los tiene el Gobierno Federal para sufragar el régimen de pensión.

"Son infundados los argumentos planteados, en efecto, el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero

de mil novecientos noventa y siete, modificado mediante diverso decreto publicado en el mencionado medio de difusión oficial, el doce de enero de dos mil doce, vigente a partir del día siguiente de su publicación, señala: …

"De la disposición transitoria se desprende en esencia, que los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda, se entregarán directamente por el **********, en los supuestos siguientes:

"**a)** Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado; lo mismo ocurre respecto a los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y sus rendimientos.

"**b)** Los trabajadores que hubieren demandado la entrega de las aportaciones con anterioridad a la entrada en vigor del artículo transitorio y que hubieren obtenido resolución firme no ejecutoriada o cuyo juicio aún se encuentre en trámite y se desistan del mismo, las aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, se les entregarán en una sola exhibición.

"**c)** Los trabajadores que se hayan beneficiado del régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, incluyendo los que demandaron la entrega de los recursos y hayan recibido resolución en su contra, deberán ser identificados y recibir los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos, en un máximo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del artículo transitorio, conforme a los procedimientos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Ahora bien, en la exposición de motivos del decreto que contiene la reforma al artículo octavo transitorio, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lo que interesa se dijo: …

"De la exposición de motivos relativa a la reforma del artículo octavo transitorio de mérito, se aprecia que tuvo como objetivo principal garantizar el derecho de los trabajadores a recibir a la brevedad los recursos de sus

subcuenta de vivienda que no hubieran sido aplicados a un crédito y a su vez, disminuir las erogaciones judiciales a los trabajadores y al instituto, permitiéndole destinar mayores recursos en beneficio del trabajador.

"Ahora bien, dicha reforma no resulta aplicable al caso, porque en ella se establece un procedimiento puramente administrativo para solicitar la devolución de los fondos de subcuenta de vivienda, directamente del **********, sin considerar la obligación que conforme al artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tienen las administradoras de fondos de realizar la entrega de los fondos de vivienda, que previamente les transfiera ese instituto; lo anterior, porque el procedimiento administrativo de mérito no puede llegar al extremo de vedar a los particulares el derecho de ocurrir ante un órgano materialmente jurisdiccional, como lo es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que se reconozca el derecho a recibir los recursos de su propiedad, en los términos en que se pruebe en ese procedimiento y en la forma que la resolución y ley establezcan. ...

"Lo anterior se corrobora, con la disposición décimo tercera del acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda 97 a los trabajadores pensionados, a los que se refiere el artículo octavo transitorio vigente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil doce, en el que se establece el procedimiento para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entregue en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda 97 a los trabajadores que obtuvieron el beneficio de una pensión en el periodo comprendido del primero de julio de mil novecientos noventa y siete al doce de enero de dos mil doce, disposición que textualmente establece: …

"Como puede advertirse con claridad, la existencia del procedimiento administrativo previsto en el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no coarta la posibilidad de los trabajadores de ocurrir a la Junta a obtener la devolución de los recursos que les corresponden, sino que su objetivo es proporcionar una forma rápida para acceder a esos recursos, pero sin menoscabo de la posibilidad de hacer valer sus derechos ante la autoridad competente, la que no debe desatender el artículo 40 de la ley que rige el instituto, pues no puede dejar de advertirse que en un procedimiento materialmente jurisdiccional, la resolución que condena al pago de una cantidad determinada o determinable, se encuentra sujeta a la litis, a las pruebas que las partes aportan y a la valoración que efectúa la autoridad y no a la voluntad del **********, la que sí prevalece

en el procedimiento administrativo a que se refiere el octavo transitorio en comento.

"Por lo anterior, no se puede desvincular a la administradora de fondos para el retiro, de la obligación de realizar la entrega de los fondos a la subcuenta de vivienda, que previamente le transfiera el **********, puesto que así lo ordena el artículo 40 de la ley que rige el instituto y que dispone: …

"Máxime, que de considerarse que debe concederse el amparo para que se condene directamente al ********** a realizar la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda de la trabajadora, se desatendería el objetivo de la reforma del artículo octavo transitorio multicitado, puesto que, mientras que el espíritu que la originó principalmente, fue la protección del derecho de los trabajadores a recibir a la brevedad los recursos de su subcuenta de vivienda que no se hubieran aplicado a un crédito, la actora que ya efectuó un procedimiento en el que resultó vencedora, se vería obligada a esperar nuevo laudo para obtener los recursos que son de su propiedad, con demérito de la justicia social que informó las reformas aludidas.

"Tampoco es de considerarse la fecha de inicio del procedimiento laboral, para determinar la procedencia o improcedencia de la reclamación formulada en éste, pues se insiste, el procedimiento administrativo previsto en el transitorio en comento, no coarta el derecho de acudir ante la autoridad laboral para que se determine la obligación del instituto de obtener la devolución de sus recursos en el monto que se acredite en el procedimiento y que el mismo le sea devuelto en la forma y términos que se establezca en la resolución, como se dispone en la disposición décima tercera del acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda 97, a los trabajadores pensionados a los que se refiere el artículo octavo transitorio vigente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil doce, en el que se establece el procedimiento para que el **********, entregue en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda 97 a los trabajadores que obtuvieron el beneficio de una pensión en el periodo comprendido del primero de julio de mil novecientos noventa y siete al doce de enero de dos mil doce, que quedó transcrita con antelación.

"Máxime que el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no ha sido reformado y establece claramente la forma en que debe hacerse la entrega de los fondos relativos a la subcuenta de vivienda al trabajador, precisando que estos recursos deberán ser

transferidos a las administradoras de los fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente, o bien, para su entrega según proceda en los términos de las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el retiro, transferencia que señala deberá ser solicitada por el trabajador; por lo que si ese dispositivo hasta la fecha no ha sido reformado, subsiste la obligación de las administradoras de fondo para el retiro (Afore), de realizar las devoluciones de dichos recursos.

"Por las circunstancias relatadas, tratándose de los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es legal la determinación de la Junta relativa a que el instituto debe transferirlos para su disposición por el trabajador a la administradora de fondos que lleve su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, ya sea para su entrega o para la contratación de la pensión correspondiente, previa solicitud de éste y siempre que ello proceda.

"En ese contexto, cuando un trabajador reclame la devolución del saldo correspondiente a la subcuenta de vivienda, al resultar favorable el laudo, es legal la determinación de que la cantidad debe ser transferida por el **********, a la Afore, para su entrega.

"Por tanto, la determinación de la Junta responsable se encuentra apegada a derecho, pues se condenó al **********, a transferir a la Afore codemandada el monto de la subcuenta de vivienda 97, a efecto de que ésta una vez que la tenga en su poder, se la entregue a la actora en términos del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"Es de aplicarse en el caso la jurisprudencia 15/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 464, del Tomo XXIX, febrero de 2009, de la Novena Época, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"'SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.' …

"Por las razones expresadas, resultan también infundados los restantes argumentos planteados, pues como se advierte, la Junta dictó el laudo con fundamento en las disposiciones vigentes y aplicables al caso, pues se insis-

te, no ha quedado derogado el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ni se ha superado la jurisprudencia 15/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos precedentes.

"En las relatadas condiciones, al ser ineficaz el concepto de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa **********."

14. El **Décimo Primer Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito (b)** con motivo de la resolución del **amparo directo** **********, el dieciocho de abril de dos mil trece (foja 346 del toca), estableció lo que sigue:

"... QUINTO.—**Estudio de los conceptos de violación.** De los antecedentes del acto reclamado se advierte que la actora reclamó a **********, la devolución y pago de la cantidad de **********, más los intereses que se sigan acumulando hasta su pago, por concepto de aportaciones hechas a favor de la parte actora a la cuenta individual en la subcuenta de vivienda 97.

"En el laudo reclamado, la Junta responsable condenó:

"1) A la Afore demandada al pago a favor de la actora, de la **subcuenta de vivienda 97**, por el monto de **********, con la actualización de los rendimientos y/o intereses acumulados.

"2) Al Infonavit a hacer la transferencia del fondo de la subcuenta de vivienda 97 a la Afore.

"Ahora, en el **único concepto de violación** la Afore quejosa aduce que, el laudo reclamado es inconstitucional, toda vez que la autoridad responsable omitió aplicar lo dispuesto por el artículo octavo transitorio del 'Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Infonavit', publicado el doce de enero de dos mil doce y que entró en vigor al día siguiente, el cual establece que es el Infonavit el responsable de la entrega de los recursos de vivienda 97, por lo que la condena decretada por la Junta al pago de tales recursos es de imposible cumplimiento, ya que jurídicamente, dicho instituto no podrá transferir a la Afore esos recursos.

"Dicho motivo de disenso resulta **infundado**.

"Primeramente, es oportuno precisar que del artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones

de la Ley del Infonavit, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, modificado a su vez, mediante diverso decreto publicado en el mencionado medio de difusión oficial, el doce de enero de dos mil doce, vigente a partir del día siguiente, se advierte, en esencia, lo siguiente:

"a) Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete y los rendimientos que se hubieran generado.

"b) Los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y sus rendimientos serán entregados en una sola exhibición en los mismos términos señalados anteriormente.

"c) La entrega a los trabajadores de los fondos a que se refiere este artículo deberá realizarse a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"Luego, es preciso mencionar que en el proceso legislativo de la mencionada reforma al artículo octavo transitorio, del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, en la exposición de motivos en lo que interesa se dijo: …

"En efecto, en la exposición de motivos a la reforma del artículo octavo transitorio, del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, publicada el doce de enero de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigencia al día siguiente, **se aprecia que los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados a un crédito de vivienda, se entregaran directamente a los trabajadores, pues se propuso que dichos recursos y rendimientos sean entregados al trabajador en una sola exhibición, con los plazos específicos y de conformidad con el procedimiento que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general**.

"Ello es así, pues con tal reforma su principal objetivo es garantizar el derecho de los trabajadores a recibir con mayor brevedad los recursos de sus

subcuenta de vivienda que no hayan sido aplicados a un crédito y a su vez, disminuirán los costos y erogaciones judiciales a los trabajadores y al instituto, permitiéndole destinar mayores recursos en beneficio del trabajador.

"Ahora, dicha reforma no resulta aplicable al caso concreto, porque si bien es cierto, establece un procedimiento para solicitar la devolución de los fondos de subcuenta de vivienda, los cuales deberán ser entregados directamente a los trabajadores en una sola exhibición, a través del instituto del Infonavit, de acuerdo al procedimiento que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, tal reforma no refiere la obligación que tienen las administradoras de fondos a realizar la entrega de los fondos de vivienda.

"Así, al no haber sido materia de reforma la obligación que tienen las administradoras de fondos de realizar las devoluciones de los mismos, no se puede desvincular a la **********, a realizar la entrega de los fondos a la subcuenta de vivienda, tal como lo resolvió la Junta responsable.

"Máxime, que el inicio del juicio laboral se realizó con fecha anterior a la vigencia de la reforma (cinco de julio de dos mil once) al artículo octavo transitorio, pues en esa época dicho numeral no establecía un procedimiento para solicitar la devolución ante el propio instituto, como lo dispone actualmente.

"Por tal razón, el artículo 40 de la Ley del Infonavit –actualmente vigente– establece claramente la forma en que debe hacerse la entrega de los fondos relativos a la subcuenta de vivienda al trabajador, **precisando que estos recursos deberán ser transferidos a las administradoras de los fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente, o bien, para su entrega según proceda en los términos de las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el retiro**, transferencia que señala deberá ser solicitada por el trabajador; por lo que hasta la fecha no ha sido reformado, de ahí que subsiste la obligación de las administradoras de fondo para el retiro (Afore), de realizar las devoluciones de dichos recursos.

"Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema ha dicho que, las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores son patrimonio de éstos y las diversas subcuentas que la integran son administradas por las administradoras de los fondos para el retiro, salvo 'la subcuenta de vivienda', pues por disposición constitucional el fondo nacional de la vivienda es administra-

do por el propio Infonavit, organismo que es el que cubre los intereses que las aportaciones patronales de vivienda a favor de los trabajadores generen.

"Por tal circunstancia, tratándose de los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda, el Infonavit debe transferirlos para su disposición por el trabajador a la administradora de fondos que lleve su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, ya sea para su entrega o para la contratación de la pensión correspondiente, previa solicitud de éste y siempre que ello proceda.

"Así, la disponibilidad de los recursos de la cuenta del sistema de ahorro para el retiro se encuentra sujeta por disposición en la ley, pues aun cuando son patrimonio de los trabajadores, ello es con las modalidades legales establecidas, dentro de ellas que su disposición debe ser autorizada por los institutos de seguridad social, es decir el IMSS y el Infonavit, tal como lo establece el artículo antes transcrito.

"Por ello, se puede advertir la estrecha vinculación entre las administradoras de fondos para el retiro y los institutos de seguridad social en la recepción, depósito, administración, transferencia y disponibilidad de los recursos, pues para que proceda la entrega de estos últimos al trabajador, deben darse las hipótesis legalmente establecidas y debe mediar autorización de los institutos e, inclusive, tratándose de los de la subcuenta de vivienda al corresponder su administración, por disposición constitucional, al Infonavit debe operar la transferencia para que pueda realizarse su entrega.

"En ese contexto, cuando un trabajador reclame de la empresa administradora de fondos (Infonavit) la devolución del saldo integral de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, dicho instituto debe hacer la transferencia correspondiente al saldo contenido en la subcuenta.

"Por tanto, la determinación de la Junta responsable es ajustada a derecho, pues se condenó al Infonavit a transferir a la Afore codemandada el monto de la subcuenta de vivienda 97, a efecto de que ésta una vez que tenga en su poder dicha cantidad, se la entregue al actor en términos del artículo 40 de la Ley del Infonavit.

"De ahí que contrariamente a lo que aduce la quejosa, la referida determinación no le causa agravio alguno, pues como ya quedó precisado en su carácter de administradora, la entrega al actor de la cantidad relativa a la subcuenta de vivienda 97, se encuentra condicionada a la transferencia que de ésta haga el Infonavit .

"Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia 15/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIX, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, febrero de 2009, página 464, de rubro: 'SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.'

"Igualmente, sobre el tema, es aplicable la jurisprudencia número I.13o.T. J/14, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 1409, Tomo XXXII, noviembre de 2010 de rubro: "SUBCUENTA DE VIVIENDA. LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LOS FONDOS ACUMULADOS EN ÉSTA, SURGE DE MANERA CONCOMITANTE Y CONSECUTIVA A LA TRANSFERENCIA QUE EL INFONAVIT DEBA HACER DE ÉSTOS A LA AFORE CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO NO SE ESPECIFIQUE QUE EL PAGO RELATIVO SE HAGA 'PREVIA TRANSFERENCIA' DE ELLOS."

"En otra parte de su único concepto de violación, la quejosa señala que, la autoridad responsable emitió un laudo inconstitucional, porque para cumplir con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, se encontraba obligada a resolver conforme a derecho, y ello significa, que debió aplicar las normas vigentes al momento de dictar sus resoluciones.

"Sigue manifestando que el nueve de julio de dos mil doce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda 97, a los trabajadores pensionados a los que se refiere el artículo octavo transitorio vigente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que la responsable debió condenar únicamente al Infonavit al pago de los recursos de vivienda 97 (sic) al trabajador, en estricto cumplimiento a las disposiciones primero y décimo tercera del referido acuerdo y absolver a la hoy quejosa de dicho pago.

"Finalmente agrega, que el hecho de que se condene a la hoy quejosa a pagar estos recursos, aun cuando se haya ordenado al instituto a transferir directamente al trabajador los recursos, implica para la quejosa causación de actos privativos y de molestia al tener que invertir en recursos humanos, tecnológicos y económicos, en el proceso de liquidación y pago de los mismos.

"Lo alegado anteriormente deviene **INFUNDADO**.

"De la lectura del laudo reclamado (fojas 88 a la 96 de autos) se desprende que contrariamente a lo manifestado por la quejosa, la autoridad responsable sí emitió la resolución impugnada, en estricto apego a derecho, esto es aplicando las normativas vigentes al momento de la resolución del asunto, como fueron la Ley del Seguro Social, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vigente, máxime que la determinación de condenar a **********, la cantidad de **********, por concepto de vivienda 97 (sic), lo realizó apoyándose en la jurisprudencia 15/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXIX, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, febrero de 2009, página 464, de rubro: 'SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.'

"Lo expuesto anteriormente, evidencia lo infundado de las manifestaciones vertidas por la quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no aplicó la normatividad vigente al momento de emitir el laudo reclamado.

"Ahora bien, en el caso debe destacarse que la Junta responsable no podía aplicar el acuerdo que menciona el quejoso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil doce, ya que al momento de emitir el laudo reclamado de veinticinco de mayo de dos mil doce, no existía el acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda 97, a los trabajadores pensionados a los que se refiere el artículo octavo transitorio vigente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ya que éste fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el nueve de julio de dos mil doce.

"Entonces, si al momento de emitir el laudo reclamado, no existía en el ámbito jurídico el referido acuerdo de nueve de julio de dos mil doce, es inconcuso que la autoridad responsable no se encontraba obligada a aplicarlo al caso concreto, ya que el referido acuerdo no formaba parte de la normativa vigente al momento de la emisión del laudo impugnado.

"En tal virtud, si en el presente caso existe pronunciamiento expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que estableció que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores era el encargado de administrar los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda y

por tanto, cuando un particular reclamara de la empresa administradora de fondos la devolución del saldo de la misma, dicho instituto debería hacer la transferencia de dichos saldos a la Afore correspondiente, a efecto de que tales recursos sean entregados al trabajador o, en su caso a sus beneficiarios, por lo que, la condena realizada por la responsable a la hoy quejosa se estime ajustada a derecho.

"Por otra parte, en el caso también conviene tener presente que, el artículo 78 de la Ley de Amparo establece que al momento de la emisión de las sentencias de amparo, el acto reclamado se apreciara tal como apareció probado ante la autoridad y no se admitirán, ni se tomaran en cuenta pruebas o manifestaciones que no se hubieren hecho valer ante la autoridad responsable.

"En ese tenor, de acuerdo al artículo 78 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado no puede emitir pronunciamiento sobre manifestaciones o hechos que no fueron vertidos ante autoridad responsable, como lo es la procedencia de la aplicabilidad del acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda 97, a los trabajadores pensionados a los que se refiere el artículo octavo transitorio vigente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el nueve de julio de dos mil doce.

"De ahí que este órgano colegiado estime que el proceder de la autoridad responsable se encuentra apegado a derecho al condenar a **********, a pagar a favor de **********, la cantidad de **********, por concepto de vivienda 97 (sic), previa transferencia que le hiciera el Infonavit, de esos recursos, máxime que la Junta responsable apoyó su determinación en jurisprudencia aplicable al caso concreto, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada con antelación.

"**Tampoco asiste razón a la quejosa** en la parte que aduce que la Junta la condenó a que el Infonavit, le transfiera el pago de los recursos, lo cual implica para la institución quejosa tener que invertir en recursos humanos, tecnológicos y económicos, en el proceso de liquidación, para devolver al actor los recursos; lo anterior, porque de lo hasta aquí expuesto no se advierte que efectivamente, como se alega, para el cumplimiento del laudo se tenga que invertir en recursos humanos, tecnológicos y económicos, pues hasta que ello no ocurra, se verá si realmente la Afore quejosa invertirá en algún recurso, además de que no se explica por qué y cómo se realizará la inversión que se alega, pues sólo se limita a afirmar sin dar mayor argumentación al respecto.

"En las relatadas condiciones, al ser ineficaz el concepto de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa **********."

15. El **Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (c)**, al resolver el **amparo directo** **********, el treinta y uno de enero de dos mil trece (foja 362 del toca), determinó en la parte conducente lo que sigue:

"QUINTO.—**Análisis de los conceptos de violación**.

"La Afore quejosa expresa, **en su único concepto de violación**, en esencia, que la Junta responsable infringió sus garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16 y 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Federal, así como lo dispuesto por los numerales 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que omitió aplicar el contenido del artículo octavo transitorio del 'Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y siete', **reformado el doce de enero de dos mil doce**.

"Sostiene lo anterior en el hecho de que si la Junta responsable emitió el **laudo reclamado con fecha veinte de junio de dos mil doce**, entonces, debió aplicar el precepto legal reformado y condenar directamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a pagar al actor los recursos de vivienda que reclamó, de ahí que **la condena impuesta resultaba de imposible cumplimiento**, ya que jurídica y operativamente el instituto de vivienda no debía transferir a la Afore los citados recursos.

"Agrega que, en el caso, la autoridad laboral también debió tomar en cuenta el 'Acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda 97 a los trabajadores pensionados a los que se refiere el artículo octavo transitorio vigente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores', en particular las disposiciones primera y décimo tercera, en las que a su parecer se estableció el pago directo por parte del Infonavit de los recursos de vivienda 97 (sic) solicitados por el actor.

"Los motivos de disenso son **infundados**.

"Es así, ya que del contenido del laudo impugnado se advierte que la Junta responsable analizó correctamente la litis que le fue planteada, relativa

a determinar si el actor tenía acción y derecho para reclamar el importe de los fondos de vivienda 97, así como los intereses e incrementos, en virtud de que fue pensionado por cesantía bajo la Ley del Seguro Social de 1973, y al respecto consideró que no existió consentimiento del trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda fueran utilizados para cubrir la pensión de cesantía que le fue concedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social; por tanto, con apoyo en lo previsto en el artículo 40 de la Ley del Infonavit condenó al **********, a transferir los fondos correspondientes a la subcuenta 97 del trabajador a la administradora de fondos para el retiro demandada, para que ésta a su vez los entregara al accionante.

"Determinación que se estima ajustada a derecho, toda vez que la autoridad laboral correctamente sustentó su decisión en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 464, Novena Época, que a la letra dice:

"'SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.' …

"Criterio de observancia obligatoria para la responsable en términos de lo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, que la constreñía a ordenar la devolución de los recursos relativos a la subcuenta de vivienda 97 al trabajador, **a través de la empresa administradora de fondos**, lo anterior, con independencia de que, como lo indica ahora la quejosa, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de doce de enero de dos mil doce, se hubiese reformado el artículo 8o. transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: …

"Se sostiene lo precedente, en atención a que, contrariamente a lo que asevera la Afore inconforme, la Junta responsable en modo alguno la condenó a realizar un pago de imposible cumplimiento, esto es, con recursos propios, respecto de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda 97 del actor, ya que lo cierto es que realmente condenó al **********, a que realizara la transferencia de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda 97, de la cuenta individual del actor por el importe de **********, como lo establecen los artículos 39 y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que la Afore estuviera en condiciones de pagar tales aportaciones al actor, reiterando que deben ser transferidos por el Insti-

tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que se insiste que la condena de pago fue realmente decretada en contra de dicho instituto, pues la Junta responsable, le impuso la obligación de realizar la transferencia de los recursos de vivienda a la Afore codemandada, para que estuviera en condiciones de entregarlos al demandante, sin que ello le depare perjuicio alguno, de lo que se sigue lo infundado del concepto de violación a estudio.

"Sin que fuera óbice a lo anterior el hecho de que por decreto de trece de diciembre de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, se reformó el artículo octavo transitorio del 'Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y siete', en el que, entre otros aspectos, como ya se vio, dispone que la entrega a los trabajadores de los fondos a que se refiere dicho numeral deberá realizarse a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al instituto los recursos correspondientes.

"Lo anterior, ya que del contenido del citado decreto se desprende que contempla dos supuestos, a saber; el primero, relativo a los trabajadores que con anterioridad a la entrada en vigor del citado precepto (trece de enero de dos mil doce), hubieren demandado la entrega de las aportaciones de vivienda, y hubieren obtenido resolución firme a su favor, que aún no cause estado o cuyo juicio aún se encuentre en trámite y desistan del mismo y, el segundo, referente a los trabajadores que se hayan beneficiado del régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, durante el periodo del primero de julio de mil novecientos noventa y siete a la fecha de entrada en vigor del precepto a comento, incluyendo los que hubieren demandado la entrega de los recursos y hayan recibido resolución en contra.

"En el caso la demanda laboral promovida por el actor no encuadra en ninguno de los citados supuestos, ya que, por una parte, el escrito inicial fue presentado ante la Junta responsable el día veintiuno de febrero de dos mil doce, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor del artículo octavo transitorio reformado (trece de enero del mismo año), por lo que no se actualiza el primer supuesto y, por otra, si bien es cierto el actor fue pensionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del treinta y uno de junio de dos mil ocho, como lo admitió expresamente el citado demandado (foja 50), y demandó la entrega de los recursos de vivienda 97, lo cierto es que no recibió resolución desfavorable, sino por el contrario benéfica a sus intereses como, se desprende del laudo que ahora impugna la Afore demandada.

"En ese sentido, contrario a lo pretendido por la Afore inconforme, la Junta responsable no podía regir su actuar conforme a los lineamientos establecidos por el vigente artículo octavo transitorio, al no encuadrar el caso en ninguno de los dos supuestos que contempla para la procedencia de la devolución de los fondos reclamados a través del **********, sin que tampoco proceda, en consecuencia, la aplicación de las disposiciones generales que invoca al estar referidas precisamente a la entrega de los recursos de vivienda en función de la actualización de las hipótesis señaladas en el artículo octavo transitorio reformado. Bajo las anteriores determinaciones, no le asiste la razón a la Afore inconforme al expresar que la Junta responsable infringió el principio de jerarquía normativa, por no aplicar las normas vigentes al momento de dictar su resolución, toda vez que en la especie la norma invocada por la quejosa no vinculaba la decisión de la responsable, sin que en el caso exista problema de jerarquía de normas por las razones apuntadas.

"Finalmente, devienen inatendibles los diversos motivos de disenso que expresa el peticionario de garantías, por los que afirma que la condena le produce actos privativos y de molestia por el proceso de liquidación al trabajador, pues como ya quedó establecido, resultó ajustada a derecho la determinación de la responsable de condenar a la administradora de fondos para el retiro demandada, para que entregue al accionante los fondos correspondientes a la subcuenta 97, previa transferencia que realice el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al encontrarse debidamente sustentada en la Jurisprudencia emanada de nuestro Máximo Tribunal, transcrita en párrafos precedentes.

"Sirve de apoyo a lo considerado la jurisprudencia número 34, aplicable por identidad de razón, publicada en la página veintiocho del *Apéndice* al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo VI, materia común, que dice:

"'AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.' …

"En las relatadas condiciones, desestimados los conceptos de violación aducidos por la Afore quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado."

16. El **Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza (d)**, en apoyo del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito) resolvió los **amparos directos** ********** (cuaderno auxiliar **********), ********** (cuaderno auxiliar **********), ********** (cuaderno auxiliar **********), ********** (cuaderno auxiliar **********) y ********** (cuaderno auxiliar

**********), el siete de marzo, veintidós de marzo, veintinueve de agosto, diecisiete de octubre todos de dos mil trece, respectivamente (fojas 138, 166, 199, 228 y 254 del toca). Al resolver el juicio de amparo directo ********** (cuaderno auxiliar **********), sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO.—Antecedentes del acto reclamado.—Conviene destacar algunos antecedentes del juicio laboral **********.—I. ********** y diversas personas por conducto de sus apoderados jurídicos, entablaron demanda en contra de **********, ahora ********** (parte quejosa), entre otros demandados, reclamándoles la devolución de las aportaciones realizadas en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como de vivienda, entre otras prestaciones.—II. El veintitrés de febrero del dos mil nueve la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua, recibió y radicó la citada demanda, registrándola con el número **********.—III. La demandada **********, ahora **********, al contestar la demanda, se excepcionó en el sentido de que resultaban improcedentes la reclamaciones de la parte actora, en términos de la jurisprudencia 185/2008, pues al ser trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social jubilada por años de servicios conforme al régimen de jubilaciones y pensiones, no tiene derecho a la devolución de los recursos relativos al rubro de cesantía en edad avanzada y vejez acumulados en su cuenta individual.—IV. El veinticinco de agosto de dos mil nueve tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.—V. Seguido el juicio por sus trámites legales, la Junta responsable dictó el once de noviembre de dos mil once el laudo correspondiente.—VI. Inconformes con lo anterior, **********, promovieron juicios de amparo de los que correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, residente en ciudad Juárez, Chihuahua; los radicó con el número **********, **********, ********** respectivamente; en el primero de los amparos señalados se concedió para el efecto de que se absolviera a **********, de pagar a **********, los recursos generados en las subcuentas de retiro correspondientes, específicamente en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez y cuota social; los dos últimos juicios de amparo fueron sobreseídos por cesación de efectos de la sentencia reclamada.—VII. La Junta responsable dictó nuevamente el laudo, en el cual en lo que respecta a la aquí quejosa, la condenó a la devolución de los recursos que conforman la subcuenta de retiro, cesantía, vejez y estatal en favor de ********** y **********; así como al pago de los conceptos relativos a los recursos de la subcuenta de vivienda en favor de las accionantes ********** y **********.—SEXTO.—Por otra parte, la quejosa señala que el laudo reclamado es inconstitucional, toda vez que no debe ser ella quien pague los recursos de la subcuenta de vivienda a

los terceros perjudicados, en virtud de que el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya reforma entró en vigor el trece de enero de dos mil doce, establece que a partir de dicha fecha debe ser el citado instituto quien entregue tales recursos, por lo que jurídica y operativamente la transferencia ordenada no puede tener lugar.—Es fundado el anterior motivo de disenso sintetizado.—El citado artículo octavo transitorio reformado dispone: … De los párrafos segundo y último del precepto legal invocado, se aprecia que los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda, a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y sus rendimientos serán entregados en una sola exhibición en los mismos términos.—Además, que tales aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, deberán ser entregadas en una sola exhibición, la cual se realizará a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregar al instituto los recursos correspondientes.—Con base en la referida disposición normativa aplicada de manera retroactiva, le asiste razón a la parte quejosa, en cuanto afirma que el ente obligado a realizar la entrega correspondiente de dichos recursos es el propio Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y no la Afore, como lo ordenó la responsable.—Al efecto, es conveniente analizar las características de la aplicación retroactiva de las normas, que prohíbe el artículo 14 constitucional, en la parte que establece: 'A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna'.—La irretroactividad consiste en que las disposiciones contenidas en leyes no se deben aplicar hacia el pasado, afectando hechos que se dieron antes de su vigencia. A este problema se le conoce también como conflicto de leyes en el tiempo.—Ahora bien, debe considerarse que las garantías individuales constituyen un límite para el ejercicio de las facultades de las autoridades estatales en sus diversas funciones lo que, desde luego, incluye las legislativas.—El artículo 14 constitucional, al establecer que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, limita las facultades señaladas, primordialmente, en cuanto a los perjuicios que se puedan provocar con la aplicación de una ley, a actos que tuvieron verificativo con anterioridad a su vigencia.—Este principio, que es claro cuando se trata de actos que tienen una realización inmediata, se presenta de una manera diversa cuando existe un conflicto de leyes en el tiempo, al dirigirse a actos que no se concretizan en un solo momento.—Es entonces, en los actos complejos cuya realización consta de varias etapas, respecto de los cuales se puede dar el conflicto de regulación, en tanto que debe precisarse cuál de las normas (la vigente al momento de realizarse el hecho originario o la vigente en el momento de concretarse) debe aplicarse.—La base fundamental de la prohibición que establece el artículo 14 constitucional, radica en que la regulación, por parte del Estado, de la actuación de

los individuos, a través de las leyes y de su aplicación, debe dirigirse a los hechos ocurridos durante su vigencia y no aplicarse en perjuicio de persona alguna.—Con base en este principio, debe considerarse que si la posición jurídica en que se encuentra un particular, en igualdad de circunstancias que otro, pero en una etapa distinta de realización del mismo acto, le permite beneficiarse de una regulación nueva en esa materia, debe entenderse que la aplicación de ésta no atenta contra los principios de seguridad jurídica que consagra el mencionado artículo 14 constitucional, pues no se actualiza el perjuicio a que se refiere dicho precepto, como elemento de la prohibición.—En la especie, del laudo reclamado (emitido el treinta y uno de enero de dos mil trece) se advierte que se condenó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a transferir a la Afore quejosa los recursos generados en la subcuenta de vivienda '92' y/o '97', para que una vez hecha dicha transferencia la citada Afore se los entregue a los ahora terceros perjudicados **********, ********** y **********.—Así las cosas, en estricto sentido no procedería la devolución del recurso respectivo por conducto del propio Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con base en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce (vigente a partir del día siguiente), en el que se reformó el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en los términos antes precisados, ya que éste inició su vigencia con posterioridad a la fecha en que se generó el derecho para la citada devolución.—Sin embargo, habida cuenta que la reforma del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, resulta en beneficio de las partes contendientes en el juicio de origen, en cuanto se refiere al ente encargado de realizar la devolución de las cantidades que obren en la subcuenta de vivienda, resulta aplicable de manera retroactiva.—Así es, como quedó precisado, en el reformado artículo octavo transitorio existe disposición expresa en el sentido de que la devolución correspondiente se encuentra a cargo del mismo instituto; circunstancia que resulta en beneficio de las partes intervinientes en el juicio de origen, pues en lo que respecta a los ahora tercero perjudicados mencionados, la devolución se tornará más expedita, pues obligar al instituto que remita los recursos a la Afore, para que ésta a su vez realice la devolución correspondiente, se traduce en trámites ociosos que sólo redundarían en el retraso del cumplimiento del laudo.—Además, tal forma de resolver no le causa perjuicio al Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, pues ya sea a través de la Afore demandada o de manera directa, subsiste su obligación de realizar la devolución de los recursos correspondientes al trabajador.—Por el contrario, se estima que la aplicación retroactiva del artículo octavo transitorio es en beneficio también del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores

y Afore demandados, pues obligar a que realicen la devolución de los montos de referencia de manera coordinada, implicaría invertir mayores recursos humanos y económicos, ante la exigencia de mayores trámites burocráticos para el cumplimiento del laudo decretado.—Además, de la exposición de motivos del referido artículo octavo transitorio se advierte que la citada reforma obedeció, entre otros factores, a la necesidad de que los trabajadores reciban a la mayor brevedad los recursos de su subcuenta de vivienda que no hayan sido aplicados a un crédito; pues al respecto se lee: 'Con la reforma que se propone se garantiza sin duda el derecho de los trabajadores a recibir con la mayor brevedad los recursos de su subcuenta de vivienda que no hayan sido aplicados a un crédito y a su vez se disminuirán los costos y erogaciones judiciales a los trabajadores y al instituto, permitiéndole destinar mayores recursos en beneficio del trabajador'.—No pasa desaperciba la jurisprudencia 2a./J. 15/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos sesenta y cuatro del Tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro y texto siguientes: 'SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.' …—Sin embargo, se estima que en la especie no resulta aplicable dicho criterio jurisprudencial, habida cuenta que el mismo se emitió con antelación a la reforma del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce) que ahora se aplica de manera retroactiva y en el cual, como quedó precisado, existe disposición expresa en el sentido de que la devolución correspondiente se encuentra a cargo del mismo instituto.—Efectos de la sentencia protectora.—En consecuencia, en las relatadas circunstancias, en apego a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado y restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos siguientes: a. La Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado.—b. Dicte otro en el que, reiterando lo que no es materia de concesión, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria: 1. Con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, absuelva a la Afore quejosa de devolver a **********, **********, **********, ********** y **********, los recursos generados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez.—2. Conforme al aludido artículo octavo transitorio reformado, determine que corresponde al propio **********, la entrega de los recursos de

vivienda respectivos (de los que habla ese numeral) constituidos en la cuenta individual de **********, ********** y **********."

17. Similares consideraciones sustentó el citado Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en auxilio del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los diversos amparos directos ********** (cuaderno auxiliar **********), ********** (cuaderno auxiliar **********), ********** (cuaderno auxiliar **********) y ********** (cuaderno auxiliar **********), los cuales dieron lugar a la jurisprudencia VIII.3o.(X Región) J/1 (10a.), que a continuación se reproduce:

"INFONAVIT. POR SU CONDUCTO CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, AUN CUANDO EL DERECHO A EXIGIRLA HAYA NACIDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ENERO DE 2012 (APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO).—El artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2012, dispone que la entrega de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda se realizará por conducto de dicho instituto, por lo que, aun cuando el derecho a exigir la entrega de tales recursos haya nacido con antelación a la entrada en vigor de esa disposición, corresponde al referido instituto devolver al trabajador o a sus beneficiarios esos recursos, al resultar procedente la aplicación retroactiva del mencionado precepto, ya que redunda en beneficio de las partes, pues obligar al instituto y a la Afore correspondiente a que realicen la devolución coordinadamente, implica invertir mayores recursos humanos y económicos, ante la exigencia de más trámites burocráticos, con el consecuente retraso en el cumplimiento del laudo correspondiente. No obsta a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 15/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 464, del Tomo XXIX, febrero de 2009, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro: 'SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.', pues se estima que dicho criterio no es aplicable, toda vez que se emitió con antelación a la reforma del indicado artículo octavo transitorio (Diario Oficial de la Federación de 12 de enero de 2012) que ahora se aplica retroactivamente." [Décima Época. Núm. Registro digital: 2005566. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. *Gaceta del Semanario Judi-*

cial de la Federación, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, materia laboral, tesis VIII.3o.(X Región) J/1 (10a.), página 1935]

18. El **Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (e)**, al resolver el **amparo directo** **********, el veinte de febrero de dos mil trece, señaló lo siguiente (foja 305 del toca):

"CUARTO.—Los conceptos de violación que hace valer **********, son esencialmente fundados en un aspecto y, suficientes, para otorgarle la protección constitucional que solicita.

"En efecto, en un último aspecto de sus motivos de inconformidad, el cual se estudia en primer término por cuestión de orden, la peticionaria del amparo se duele, en esencia, de que el laudo reclamado es violatorio de las garantías que en su favor estatuyen los artículos 14 y 16 del Pacto Federal, toda vez que en él la autoridad del conocimiento omitió fundamentar correctamente ese fallo.

"Argumento que, como se anotó y atendiendo a la causa de pedir, resulta esencialmente fundado por lo que se indica a continuación:

"Ciertamente, como afirma la institución financiera peticionaria de amparo, la Junta del conocimiento, transgredió en su perjuicio el principio de debida fundamentación legal que toda decisión judicial debe tener, de conformidad con el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, ya que al resolver la controversia que se sometió a su potestad, respecto de la devolución de los recursos existentes en favor de los actores en la subcuenta denominada vivienda '97, omitió tomar en cuenta que el doce de enero de dos mil doce, se publicaron reformas al octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

"Así es, las reformas en comento son del tenor siguiente: …

"En ese contexto, resulta evidente que al haber condenado a la Afore quejosa, a la devolución de los fondos de vivienda '97 propiedad de los actores, previa transferencia por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la autoridad responsable no atendió a lo que a ese respecto previene la reforma legal que sufrió el artículo octavo transitorio de la ley que rige al citado Instituto de vivienda, transcrita en el párrafo que precede; cuestión que, al encontrarse vigente al momento de emitir el laudo que se reclama en esta vía, resultaba trascendental para el resultado de la controversia planteada, porque en el último párrafo de ese numeral reformado,

se determina que, a partir de su entrada en vigor, la entrega de los recursos conforme a dicho lineamiento se deberá hacer a través del Instituto de Vivienda; cuestión esta última a la que, se insiste, debió atender la resolutora quien está obligada a resolver en los términos de la ley sustantiva vigente al momento en que se dicte el laudo correspondiente. …

"Dados los efectos para los que habrá de concederse el amparo, por el momento no es dable analizar los motivos de inconformidad que se esgrimen en lo concerniente al fondo del asunto, en tanto que, la responsable en el fallo que dicte para acatar lo aquí determinado deberá analizar de nueva cuenta las condenas establecidas en contra de la Afore quejosa.

"Consecuentemente, al resultar violatorio de garantías el laudo que por esta vía se impugna, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable lo deje insubsistente y, en su lugar, emita otro en el que única y exclusivamente determine lo conducente en torno a la aplicación de la reforma de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación de doce de enero de dos mil doce, y que entró en vigor al día siguiente esto es, el trece de enero de la misma anualidad; debiendo reiterar aquellos aspectos que no fueron materia de esta ejecutoria y que no se vean afectados por la concesión del amparo.

"Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46, 158, 188, 190 y 192 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (sic), es de resolverse y se resuelve:

"ÚNICO.—La Justicia de la Unión **ampara y protege a** **********, contra los actos que reclama de la **Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje**, que hizo consistir en el laudo de fecha **********, dictado en el juicio laboral número **********, seguido por ********** **y otros**, en contra de la **quejosa y otros. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria**."

19. Por su parte, el anterior **Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región (f)**, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en apoyo del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en

San Andrés Cholula, Puebla, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, resolvió el **amparo directo** ********** (relacionado con el amparo directo **********) (expediente de origen **********), el quince de marzo de dos mil trece, en los siguientes términos (foja 474 del toca):

"**VII.** Los antecedentes del caso, son los siguientes:

"**1.** Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil once ante la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en el Estado de Puebla, **********, promovió juicio laboral en contra del **********, de quienes reclamó las prestaciones que enseguida se transcriben:

"Prestaciones

"I. De esta H. Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje:

"A) La declaración que el suscrito, en representación de mis menores hijos de nombres **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, son los únicos y legítimos beneficiarios de la extinta **********.

"II. Del **********, reclamo el reconocimiento de que:

"A) Recibió las cotizaciones hechas en favor de mi finada esposa, quien en vida llevó el nombre de **********, para constituir los Fondos de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, previstas en el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, con el número de seguridad social **********.

"B) Durante el tiempo en el cual mi extinta esposa prestó sus servicios para distintas empresas privadas, le fueron hechas en su favor las aportaciones previstas en la Ley del Infonavit, que comprende las aportaciones denominadas sistemas de ahorro para el retiro (SAR), que inicia a partir del segundo bimestre de 1992, al tercer bimestre de 1997; y pensiones y/o Afores, que abarcan el cuarto bimestre de 1997 a la fecha.

"C) Reconocer que el suscrito, en representación de mis menores hijos, tengo derecho a que la administradora de fondos para el retiro demandada, me entregue por cuenta de dicho instituto y del Infonavit, los fondos de la cuenta individual de vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro previstos en las leyes del Seguro Social y del Infonavit.

"III. Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reclamo en forma integral que implique la transferencia de recursos del fondo de vivienda a la Afore demandada:

"A) El pago de las aportaciones que realicé al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), hasta el 30 de junio de 1997, en términos de los artículos 40 y 43 Bis de la Ley del Infonavit.

"B) El pago de las aportaciones correspondientes a la subcuenta de vivienda, de mi extinta esposa **********, a partir del 1 de julio de 1997, así como de los rendimientos generados y que se generen hasta la fecha en que se cumplimente el laudo que dicte esa H. Junta, en términos de los artículos 40 y 43 Bis de la Ley de Infonavit.

"IV. A **********, le reclamo:

"A) El pago integral de la cantidad que resulte más los intereses y rendimiento generados y que se generen, hasta que se cumplimente el laudo que emita esta H. Junta, por concepto de las aportaciones realizadas en la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con número de seguridad social ********** y clave única de registro de población (CURP) **********, de mi extinta esposa **********, de conformidad con lo estipulado por los artículos 122, 154, 159 fracción I, 162, 169, 174, 175 y demás relativos y aplicables de la Ley del Seguro Social vigente, en relación con el 40 de la Ley de Infonavit vigente. Sin cobro de comisiones de ninguna especie, en virtud de que la mora en este caso es atribuible única y exclusivamente al demandado" (**fojas 2 a 4 del juicio laboral**).

"**2.** Así mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil once (**foja 26 ídem**), se admitió dicha demanda a trámite y el veintisiete de junio de dos mil once, tuvo verificativo la audiencia en la que se escucharon a los presupuestos beneficiarios de la extinta trabajadora **********, declarándose como únicos beneficiarios al actor **********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos ********** y **********, todos de apellidos ********** (**fojas 45 y 46 ibídem**).

"**3.** Posteriormente, el siete de octubre de dos mil once, se desahogó la audiencia trifásica laboral, con la comparecencia de la parte actora y de las demandadas y sus respectivos apoderados (**fojas 69 y 70 del juicio laboral**).

"**4.** Finalmente, el veintitrés de agosto de dos mil doce (**fojas 73 a 89 ídem**), la Junta responsable dictó el laudo en el que resolvió lo siguiente:

"'PRIMERO.—El actor ********** **(sic)**, acreditó parcialmente sus acciones, y las demandadas ********** **y** **********, justificaron parcialmente sus excepciones y defensas.—SEGUNDO.—Se condena al **********, a transferir los recursos a la administradora de fondos para el retiro **********, en una sola exhibición, la totalidad de los fondos acumulados por ese concepto a nombre de la finada **********, **con los rendimientos y/o intereses que se hubieran generado y que se generen hasta que se cumplimente el laudo**.—TERCERO.—se condena a las demandadas ********** y **********, a que le entreguen al actor **********, en representación de sus menores hijos de nombres ********** y **********, todos de apellidos **********, como legítimos beneficiarios de la extinta **********, la totalidad de la (sic) aportaciones hechas más los rendimientos que se hayan generado en la subcuenta de vivienda, con importe de **********. Por lo que hace al demandado **********, se le condena a reconocer le sean entregados a la actora los fondos de vivienda de su cuenta individual.—CUARTO.—Se condena a **********, a pagar a **********, en representación de sus menores hijos de nombres ********** y **********, todos de apellidos **********, como legítimos beneficiarios de la extinta **********, la cantidad de **********, por concepto de subcuenta de retiro, más los rendimientos que hayan generado y genere hasta la cumplimentación del laudo.' (**fojas 88 y 89 del expediente laboral**).

"**El anterior fallo constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías**.

"VIII. …

"Ahora bien, en su **único concepto de violación** la Afore quejosa aduce, sustancialmente, que el laudo reclamado transgrede las garantías de motivación, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica tutelada en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

"Que lo anterior es así en virtud de que a partir de la reforma al artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, vigente desde el trece enero de dos mil doce, la aquí quejosa administradora de fondos para el retiro, quedó desvinculada del mecanismo, que conforme a dicha disposición transitoria anterior a la citada reforma contemplaba el marco jurídico de la materia para hacer el pago de los recursos habidos en la subcuenta de vivienda 97 a sus titulares.

"Ello, porque el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vigente, dispone que la

entrega de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda debe hacerla dicho instituto directamente al trabajador.

"En ese sentido refiere que la Junta responsable dejó de observar la ley vigente en la data (veintitrés de agosto de dos mil doce), en que emitió el laudo reclamado, pues si bien es cierto que cuando entró en vigor la reforma en cita, ya se había iniciado el procedimiento con motivo del ejercicio de la acción por parte del actor, también lo es que fue previa al dictado del laudo.

"Por tanto, la a quo estaba obligada a aplicar la disposición transitoria reformada en beneficio del actor, esto es, condenar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la entrega inmediata y directa de los recursos de la subcuenta de vivienda a la parte actora, sin que tuviera que transferir a la Afore quejosa dichos recursos para que ésta a su vez se los entregara al actor.

"Concluye que se le está condenado de manera indirecta a continuar vinculada a una relación jurídica que ya no está vigente, a saber la de fungir como intermediaria entre el instituto demandado y el titular de los recursos, y de manera directa a llevar a cabo una acción consistente en que reciba del instituto los recursos y se los entregue al actor, lo que por disposición expresa de la ley ya no le corresponde.

"Los anteriores argumentos resultan **fundados**, como se demuestra a continuación.

"En principio, debe precisarse cuáles son las normas de naturaleza sustantiva y cuáles son las de naturaleza adjetiva, respecto tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 170/2011, en los siguientes términos: …

"Así, se tiene que una norma sustantiva es aquella que reconoce derechos e impone obligaciones, mientras que **la norma de naturaleza adjetiva es la que permite hacer efectivo el ejercicio de esos derechos, así como el cumplimiento de las obligaciones**.

"En ese tenor, cabe precisar que tratándose de leyes procesales las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento vigentes en el momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni tampoco las vigentes en el momento en que el juicio inicie, toda vez que **los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en**

cada etapa, debido a lo cual cada una de sus fases se rige por la norma vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas sobre normas de carácter adjetivo, el legislador haya establecido reglas expresas sobre su aplicación en otro sentido.

"La anterior consideración, se contiene en la tesis 2a. XLIX/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 273, Tomo XXIX, mayo de 2009, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que es del tenor siguiente:

"'NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA.' …

"Ahora bien, el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el **doce de enero de dos mil doce**, es del tenor siguiente: …

"De la citada disposición transitoria se advierte, en la parte que aquí interesa, que la entrega de los fondos de la subcuenta de vivienda regulada por dicho dispositivo, será realizada directamente por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a los beneficiarios.

"Por tanto, se puede colegir que dicho artículo transitorio en su último párrafo, se puede equiparar a una norma de naturaleza adjetiva, pues permite hacer efectivo el ejercicio de un derecho, esto eso, establece el mecanismo mediante el cual se devolverán los recursos de la subcuenta de vivienda, para el cumplimiento de tal derecho otorgado al trabajador.

"En el caso concreto, como se precisó con antelación, la Junta responsable mediante **laudo de veintitrés de agosto de dos mil doce, condenó al** **********, a entregar a la parte actora la totalidad de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a nombre de la finada ********** con los rendimientos y/o intereses que se hubieran generado hasta que se cumplimente el laudo, y para tal efecto ordenó a dicho instituto transfiera dichos recursos a la administradora de fondos para el retiro **********, aquí quejosa.

"Determinación la anterior, que este Tribunal Colegiado estima incorrecta, toda vez que, tal como lo afirma la quejosa, la a quo al momento de emitir el laudo reclamado, omitió considerar lo dispuesto en el último párrafo del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el **doce de enero de dos mil doce**, el cual dispone que la entrega de los fondos de la subcuenta de vivienda a los trabajadores deberá realizarse a través del citado instituto demandado.

"Por lo que al momento en que la Junta responsable determinó a cargo de quién estaría la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda a la parte actora, debió atender lo dispuesto (sic) la disposición transitoria en comento vigente en esa data (**veintitrés de agosto de dos mil doce**).

"Se afirma lo anterior, porque como se dijo, el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su último párrafo, regula el mecanismo mediante el cual se devolverán los recursos de la subcuenta de vivienda, para el cumplimiento del derecho otorgado al trabajador, esto es, prevé elementos relativos a la forma de ejercer un derecho, por lo que se puede equiparar a una norma de naturaleza adjetiva, y le sean aplicables lo principios que rigen a las normas procesales.

"Máxime, que en la reforma de mérito no se condicionó su aplicación, pues en la misma se estableció, que entraría en vigor al día siguiente de su publicación esto es, el **trece de enero de dos mil doce**.

"Bajo ese orden de ideas, si bien es cierto, la disposición transitoria de que se trata (reformada) no estaba en vigor a la fecha (**cinco de enero de dos mil once**), en que se entabló la contienda laboral, también lo es, que la misma adquirió vigencia el **trece de enero de dos mil doce**, esto es durante la tramitación del controvertido de origen y con anterioridad al dictado del laudo reclamado (**veintitrés de agosto de dos mil doce**).

"Luego toda vez que dicho artículo transitorio, en su último párrafo, permite hacer efectivo el ejercicio de un derecho (devolución de fondos subcuenta de vivienda), y por ende, regular un aspecto meramente procesal, es que la Junta responsable debió aplicarlo al momento de emitir el laudo reclamado.

"Por tanto, resulta incorrecto que la a quo haya condenado a la administradora de fondos para el retiro **********, aquí quejosa, a devolver a la parte actora la totalidad de los recursos generados en la subcuenta de vivienda, previa transferencia que le hiciera de éstos, el **********.

"En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable realice lo siguiente:

"a) Deje insubsistente el laudo reclamado;

"b) Dicte uno nuevo, en el que atendiendo los lineamientos expuesto en esta ejecutoria, con base en lo dispuesto en el último párrafo del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, vigente a partir del trece de enero de dos mil doce, determine que **corresponde al ********** realizar directamente la devolución** de los recursos de la subcuenta de vivienda a la parte actora; y,

"c) Reitere los demás aspectos que no fueron materia de esta ejecutoria.

20. De los asuntos que resolvieron los Tribunales Colegiados contendientes cabe considerar en primer término los **elementos fácticos comunes** que los caracterizan:

• La parte actora demandó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de una administradora de fondos para el retiro (AFORE), la devolución de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda.

• La Junta laboral condenó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a transferir a la administradora de fondos para el retiro demandada los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda, también condenó a esta última, a entregar a la parte actora dichos fondos.

• Contra tal condena, la administradora de fondos para el retiro promovió juicio de amparo directo.

21. Por otra parte, se advierte que en los asuntos que estuvieron bajo la jurisdicción de los Tribunales Colegiados contendientes aparece un **elemento que varía**, en tanto que en algunos de ellos la demanda laboral de la que derivó el juicio de origen se presentó **antes** del trece de enero de dos mil doce y en otros **después**. Ello puede eventualmente trascender porque justamente en esa fecha, el trece de enero de dos mil doce, entró en vigor el decreto que reformó el artículo octavo transitorio del "*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997*", publicado en ese medio de difusión, el doce de enero de dos mil doce, que establece lo siguiente:

(Reformado, D.O.F. 12 de enero de 2012)

"**OCTAVO.**—Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado.

"Los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos serán entregados en una sola exhibición en los mismos términos y condiciones a los establecidos en el párrafo anterior.

"En el caso de los trabajadores que con anterioridad a la entrada en vigor del presente artículo, hubieren demandado la entrega de las aportaciones a que se refiere el párrafo anterior y que hubieren obtenido resolución firme a su favor que aún no hubiere sido ejecutoriada o cuyo juicio aún se encuentre en trámite y se desistan del mismo, dichas aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, les deberán ser entregadas en una sola exhibición.

"En el caso de los trabajadores que se hayan beneficiado del régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 durante el periodo que va del primero de julio de 1997 a la fecha en la que entre en vigor el presente artículo, incluyendo aquellos que hayan demandado la entrega de los recursos y hayan recibido resolución en su contra, deberán ser identificados y recibir los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos, en un máximo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del presente artículo transitorio, conforme a los procedimientos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general, que deberá expedir en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente artículo.

"La entrega a los trabajadores de los fondos a que se refiere este artículo deberá realizarse a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; para efectos del párrafo tercero y cuarto de este artículo transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al instituto los recursos correspondientes."

22. Cabe precisar que todos los laudos de los juicios de origen se emitieron estando ya vigente la disposición que antecede.

23. Ahora, las **fechas en las que iniciaron los juicios laborales** son las que enseguida se precisan respecto de cada uno de los amparos directos que conocieron los Tribunales Colegiados contendientes, ***antes*** o ***después*** del **trece de enero de dos mil doce**, fecha en que entró en vigor el referido decreto que reformó el artículo octavo transitorio del "*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997*", publicado en ese medio de difusión el doce de enero de dos mil doce:

- Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito (a):

********** ***después***, siete de diciembre de dos mil doce (página 22 de esa resolución).

********** ***después***, veintiuno de junio de dos mil doce (página 44 de esa resolución).

- Décimo Primer Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito (b):

********** ***antes***, cinco de julio de dos mil once (página 1 de esa resolución).

- Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (c):

********** ***después***, veintiuno de febrero de dos mil doce (página 1 vuelta de esa resolución).

- Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza (d), en apoyo del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito):

********** (cuaderno auxiliar **********) ***antes***, veintitrés de marzo de dos mil siete (página de esa resolución).

********** (cuaderno auxiliar **********) ***antes***, veintiocho de marzo de dos mil siete (página de esa resolución).

********** (cuaderno auxiliar **********) ***antes***, uno de agosto de dos mil siete (página de esa resolución).

********** (cuaderno auxiliar **********) ***antes***, dieciséis de octubre de dos mil ocho (página de esa resolución).

********** (cuaderno auxiliar **********) ***antes***, en el año dos mil nueve (página de esa resolución).

- Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (e):

********** ***después***, dieciséis de abril de dos mil doce (página 2 de esa resolución).

- Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región (f), actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en apoyo del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito:

********** (relacionado con el amparo directo **********) [expediente de origen **********] ***antes***, cinco de enero de dos mil once (página 13 de esa resolución).

24. No obstante, se advierte que los Tribunales Colegiados que conocieron de asuntos en los que los juicios laborales iniciaron con ***anterioridad*** a la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, adoptaron posturas distintas respecto del problema referente a quién corresponde entregar a los trabajadores los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en la obtención de la vivienda **[al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o a las administradoras de fondos para el retiro (Afores)]**; y, también los diversos órganos colegiados que conocieron de asuntos en los que los juicios laborales iniciaron con ***posterioridad*** a la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, arribaron a posturas diferentes en torno a esa problemática jurídica, como se muestra a continuación.

- Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito (a):

********** **Afore**

********** **Afore**

- Décimo Primer Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito (b):

********** **Afore**

- Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (c):

********** **Afore**

- Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza (d), (en apoyo del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito):

********** (cuaderno auxiliar **********) **Infonavit**

********** (cuaderno auxiliar **********) **Infonavit**

********** (cuaderno auxiliar **********) **Infonavit**

********** (cuaderno auxiliar **********) **Infonavit**

********** (cuaderno auxiliar **********) **Infonavit**

- Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (e):

********** **Infonavit**

- Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región (f), actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en apoyo del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito:

********** (relacionado con el amparo directo **********) [expediente de origen **********] **Infonavit**

25. En ese tenor, los Tribunales identificados como **a, b** y **c**, arribaron a la postura de que la devolución corresponde a las administradoras de fondos para el retiro [Afores], mientras que los órganos colegiados **d, e** y **f**, concluyeron que atañe directamente al Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores [Infonavit], ello bajo las siguientes consideraciones a continuación sintetizadas:

(a) El **Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito** cuyo juicio de amparo directo tuvo su origen en un juicio laboral iniciado el veintiuno de junio de dos mil doce **********, esto es, ***después*** del trece de enero de dos mil nueve, fecha en que entró en vigor el decreto que reformó el artículo octavo transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997", publicado en el citado medio de difusión el doce de enero de dos mil doce, determinó que no se puede desvincular a la administradora de fondos para el retiro [Afore] de la obligación de realizar la entrega a los trabajadores los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en la obtención de vivienda, que previamente le transfiera el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ello considerando que el artículo octavo transitorio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, no resulta aplicable al caso, porque en esa reforma se establece un procedimiento puramente administrativo para solicitar la devolución de los fondos de subcuenta de vivienda, directamente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sin considerar la obligación que, conforme al artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tienen las administradoras de fondos de realizar la entrega de los fondos de vivienda, que previamente les transfiera ese instituto. Lo anterior se corrobora, dijo el órgano colegiado, con la disposición décimo tercera del acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda 97 a los trabajadores pensionados, a los que se refiere el artículo octavo transitorio vigente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de julio de dos mil doce, en el que se establece el procedimiento para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores entregue en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda 97, a los trabajadores que obtuvieron el beneficio de una pensión en el periodo comprendido del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, al doce de enero de dos mil doce. Asimismo, estableció que la existencia del procedimiento administrativo previsto en el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no coarta la posibilidad de los trabajadores de ocurrir a la Junta a obtener la devolución de los recursos que les corresponden, sino que su objetivo es, proporcionar una forma rápida para acceder a esos recursos, pero

sin menoscabo de la posibilidad de hacer valer sus derechos ante la autoridad competente, la que no debe desatender el artículo 40 de la ley que rige el instituto, puesto que en un procedimiento materialmente jurisdiccional, la resolución que condena al pago de una cantidad determinada o determinable, se encuentra sujeta a la litis, a las pruebas, que las partes aportan y a la valoración que efectúa la autoridad y no, a la voluntad del instituto, la que sí prevalece en el procedimiento administrativo a que se refiere el octavo transitorio en comento. Por ello, concluyó, no se puede desvincular a la administradora de fondos para el retiro de la obligación de realizar la entrega de los fondos a la subcuenta de vivienda, que previamente le transfiera el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, puesto que así lo ordena el artículo 40 de la ley que rige al instituto.

(b) El **Décimo Primer Tribunal Colegiado de Trabajo del Primer Circuito**, cuyo juicio de amparo directo tuvo su origen en un juicio laboral iniciado el cinco de julio de dos mil once, esto es, ***antes*** del indicado trece de enero de dos mil doce, estableció que no se puede desvincular a la administradora de fondos para el retiro [Afore] de la obligación de realizar la entrega a los trabajadores los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en la obtención de vivienda, que previamente le transfiera el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ello considerando que el artículo octavo transitorio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, no resulta aplicable al caso, porque si bien es cierto establece un procedimiento para solicitar la devolución de los fondos de subcuenta de vivienda, los cuales deberán ser entregados directamente a los trabajadores en una sola exhibición, a través del instituto citado, de acuerdo al procedimiento que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, tal reforma no refiere la obligación que tienen las administradoras de fondos de realizar la entrega de los fondos de vivienda. Así, al no haber sido materia de reforma la obligación que tienen las administradoras de fondos de realizar las devoluciones, no se les puede desvincular, máxime que el inicio del juicio laboral se realizó con fecha anterior a la vigencia de la reforma (cinco de julio de dos mil once) al artículo octavo transitorio, pues en esa época dicho numeral no establecía un procedimiento para solicitar la devolución ante el propio instituto, como lo dispone actualmente. Por tal razón, el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores –actualmente vigente– establece claramente la forma en que debe hacerse la entrega de los fondos relativos a la subcuenta de vivienda al trabajador, precisando que estos recursos deberán ser transferidos a las administradoras de los fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente, o bien, para su entrega según proceda en los términos

de las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, transferencia que señala deberá ser solicitada por el trabajador; precepto que no ha sido reformado, subsistiendo por ello la obligación de las administradoras de fondos para el retiro de realizar las devoluciones de dichos recursos.

(c) El **Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, cuyo juicio de amparo directo tuvo su origen en un juicio laboral iniciado el veintiuno de febrero de dos mil doce, esto es, ***después*** del indicado trece de enero de dos mil doce, señaló que corresponde a la administradora de fondos para el retiro [Afore] la obligación de realizar la entrega a los trabajadores de los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en la obtención de vivienda, que previamente le transfiera el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ello considerando lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con independencia de que se hubiera reformado el artículo octavo transitorio de referencia, puesto que el caso del actor no encuadraba en ninguno de los dos supuestos que establece para la procedencia de la devolución de los fondos reclamados a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

(d) El **Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza**, cuyo juicio de amparo directo ********** tuvo su origen en un juicio laboral iniciado en el año dos mil nueve, esto es, ***antes*** del indicado trece de enero de dos mil doce, consideró que corresponde al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregar a los trabajadores los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en la obtención de vivienda, ello con apoyo precisamente en el artículo octavo transitorio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, aplicado de manera retroactiva, por ser en beneficio de las partes contendientes en el juicio de origen, puesto que la devolución se tornará más expedita, dado que obligar al instituto a que remita los recursos a la administradora de fondos para el retiro, para que ésta a su vez realice la devolución correspondiente, se traduce en trámites ociosos que sólo redundarían en el retraso del cumplimiento del laudo.

(e) El **Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito**, cuyo juicio de amparo directo tuvo su origen en un juicio laboral iniciado el dieciséis de abril de dos mil doce, esto es, ***después*** del indicado trece de enero de dos mil doce, concluyó que al haber condenado a la Afore quejosa a la devolución de los fondos de vivienda ‘97 propiedad de los actores, previa transferencia por parte del Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores, la autoridad responsable no atendió a lo que a ese respecto previene la reforma legal que sufrió el artículo octavo transitorio de la ley que rige al citado Instituto de Vivienda, que se encontraba vigente al momento de emitirse el laudo, cuyo último párrafo determina que, a partir de su entrada en vigor, la entrega de los recursos conforme a dicho lineamiento se deberá hacer a través del Instituto de Vivienda (Infonavit); cuestión esta última a la que debió atender la resolutora quien está obligada a resolver en los términos de la ley sustantiva vigente al momento en que se dicte el laudo correspondiente.

(f) Por su parte, el anterior **Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región**, cuyo juicio de amparo directo tuvo su origen en un juicio laboral iniciado el cinco de enero de dos mil once, esto es, ***antes*** del indicado trece de enero de dos mil doce, estimó que conforme al artículo octavo transitorio multicitado, la entrega de los fondos de la subcuenta de vivienda a los trabajadores deberá realizarse a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), artículo transitorio que, precisó, se puede equiparar a una norma de naturaleza adjetiva [citó al efecto la tesis 2a. XLIX/2009, de rubro: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA."], sin que la reforma relativa, que adquirió su vigencia durante la tramitación del juicio de origen y con anterioridad del dictado del laudo, haya condicionado su aplicación.

26. Existe contradicción de tesis, por un lado, entre los tribunales que arribaron a posturas distintas, a pesar de que las demandas laborales se presentaron ***antes*** de que entrara en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce [**d** y **f** contra **b**]; y, por otro lado, entre los tribunales que arribaron a posturas distintas no obstante que las demandas se presentaron ***después*** de que entrara en vigor el decreto en mención (**a** y **c** contra **e**).

27. Lo anterior, sin dejar de considerar que **a, b** y **c** arribaron a la postura de que la devolución corresponde a las administradoras de fondos para el retiro (Afores), mientras que **d, e** y **f** concluyeron que atañe directamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

28. El **punto de contradicción** a dilucidar estriba en determinar a quién corresponde entregar a los trabajadores los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados en la obtención de

la vivienda [al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o a las administradoras de fondos para el retiro (Afores)], en los casos en que la demanda laboral que reclame la devolución de dichos fondos se haya presentado ***antes***, así como en aquellos en que se haya promovido ***después*** del trece de enero de dos mil doce, fecha en que entró en vigor el decreto que reformó el artículo octavo transitorio del "*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997*", publicado en ese medio de difusión el doce de enero de dos mil doce.

29. QUINTO.—Para resolver la presente contradicción de tesis se tiene presente que esta Segunda Sala al resolver, por unanimidad de cinco votos, los amparos en revisión 654/2012, 699/2012, 738/2012, 754/2012 y 718/2012, en sesiones de treinta de octubre y cuatro de diciembre, ambas de dos mil trece, interpretó la reforma al artículo octavo transitorio del "*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997*", publicada en dicho medio de difusión el doce de enero de dos mil doce, cuyo contenido conviene traer a cuenta nuevamente.

(Reformado, D.O.F. 12 de enero de 2012)
"OCTAVO.—Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado.

"Los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos serán entregados en una sola exhibición en los mismos términos y condiciones a los establecidos en el párrafo anterior.

"En el caso de los trabajadores que con anterioridad a la entrada en vigor del presente artículo, hubieren demandado la entrega de las aportaciones a que se refiere el párrafo anterior y que hubieren obtenido resolución firme a su favor que aún no hubiere sido ejecutoriada o cuyo juicio aún se encuentre en trámite y se desistan del mismo, dichas aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, les deberán ser entregadas en una sola exhibición.

"En el caso de los trabajadores que se hayan beneficiado del régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 durante el periodo que va del primero de julio de 1997 a la fecha en la que entre en vigor el presente artículo, incluyendo aquellos que hayan demandado la entrega de los recursos y hayan recibido resolución en su contra, deberán ser identificados y recibir los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda a partir del cuarto bimestre de 1997 y sus rendimientos, en un máximo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del presente artículo transitorio, conforme a los procedimientos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general, que deberá expedir en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente artículo.

"La entrega a los trabajadores de los fondos a que se refiere este artículo deberá realizarse a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; para efectos del párrafo tercero y cuarto de este artículo transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al instituto los recursos correspondientes."

30. Al respecto se dijo que de ese precepto derivan las siguientes premisas:

• La norma transitoria está dirigida a todos los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

• Esos trabajadores recibirán, en una sola exhibición, los fondos de la subcuenta de vivienda hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, así como los rendimientos generados.

• También recibirán, en una sola exhibición, los fondos relativos al cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, en adelante y sus rendimientos.

• En relación con la entrega de los recursos del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete en adelante, se describe:

• Los trabajadores que hubiesen demandado la entrega de esos recursos, antes de la entrada en vigor de la norma, y hubiesen obtenido resolución firme a su favor sin ejecutoriarse o cuyo juicio se encuentre en trámite y desistan, recibirán las aportaciones y sus rendimientos, generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, en una sola exhibición.

• Los trabajadores que se hayan pensionado con el citado régimen de seguridad social, en el periodo que va del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, al doce de enero de dos mil doce, incluyendo los que demandaron la entrega de los recursos, pero obtuvieron resolución en su contra, recibirán los fondos y sus rendimientos en un máximo de dieciocho meses, a partir de la entrada en vigor del artículo transitorio, de acuerdo con las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberán expedirse en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del artículo.

• La entrega se hará a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al instituto los recursos correspondientes.

31. Se indicó que el citado artículo transitorio reformado distingue los periodos respecto de los cuales serán entregados los recursos de vivienda, a saber: los generados hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, y los que corresponden al cuarto bimestre de ese año en adelante.

32. Se explicó que esa distinción tenía su razón de ser, porque el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa siete, tenía una redacción diferente a la que se encuentra vigente a partir del trece de enero de dos mil doce.

33. El contenido normativo del artículo octavo transitorio, antes de su reforma, era el siguiente:

"OCTAVO.—Los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes a las aportaciones acumuladas hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado. Las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir dichas pensiones."

34. Se señaló que desde la fecha en que entró en vigor ese precepto transitorio (primero de julio de mil novecientos noventa y siete), se disponía

la entrega de los recursos de vivienda acumulados hasta el tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete; no así, los posteriores, respecto de los cuales se ordenó su abono para cubrir las pensiones correspondientes.

35. Se informó que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del precepto transitorio, conforme a los siguientes criterios:

"INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, VIOLA LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.—La citada disposición transitoria, al prever que los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de dicha ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado, en tanto que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores, viola la garantía de previa audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, ya que el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sin permitirles decidir el destino o uso que consideren conveniente a sus intereses, respecto de la cantidad total acumulada en la subcuenta de vivienda que forma parte de su patrimonio, da a los mencionados recursos un destino diferente a aquel para el cual fueron constituidos por el artículo 123, apartado A, fracción XII, constitucional, consistente en la obtención de un crédito accesible y barato para la adquisición de vivienda o, en su defecto, la entrega al trabajador de tales fondos al momento de su retiro de la vida laboral." (Tesis 2a. XVIII/2006, publicada en la página 461 del Tomo XXIII, marzo de 2006, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, número de registro digital: 175574)

"INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El citado artículo transitorio dispone las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para un fin diverso para el cual fueron instituidas, en cuanto prevé que los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio

de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de esta ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado, en tanto que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores; lo anterior transgrede el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, constituye una garantía social, al igual que la del seguro de invalidez o vejez, ambas tienen constitucionalmente finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí ni debe dárseles el mismo destino, salvo que haya consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión." (Jurisprudencia 2a./J. 32/2006, publicada en la página 252 del Tomo XXIII, marzo de 2006, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, número de registro digital: 175575)

36. Se dijo que de acuerdo con los citados criterios jurisprudenciales, el artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores era contrario al derecho de audiencia, porque no permitía a los trabajadores decidir el destino o uso que consideren conveniente a sus intereses, respecto de la cantidad total acumulada en la subcuenta de vivienda del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y posteriores; además, de que transgredía el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no obstante, que los trabajadores tienen el derecho a obtener tanto créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, como un seguro de invalidez o vejez, dicha norma confunde entre sí las aportaciones relativas para ambos fines y les da el mismo destino.

37. Se expresó que la reforma que sufrió el artículo octavo transitorio, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, tuvo como propósito fundamental, solucionar la problemática relacionada con el impedimento para recibir los recursos de vivienda posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete; tal como se dio cuenta en la exposición de motivos de ocho de noviembre de dos mil once, según se advertía de la siguiente transcripción:

"... Es necesario resolver el problema que enfrentan actualmente los trabajadores sujetos al régimen de pensiones previsto en la Ley del Seguro

Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 para recibir los recursos de su subcuenta de vivienda, ya que dichos trabajadores fueron afectados por la disposición contenida en el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, referente a que las aportaciones al fondo de vivienda subsecuentes al tercer bimestre de 1997 se abonarán para cubrir sus pensiones, lo cual les impide recibir directamente los recursos de su subcuenta de vivienda como es su derecho.

"El objetivo de la subcuenta de vivienda es precisamente facilitar la adquisición de una vivienda, por lo que si dichos recursos no se aplican para un crédito de vivienda, deben entregarse al trabajador o a sus beneficiarios. No obstante, el citado artículo octavo transitorio establece que las aportaciones de los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, subsecuentes al tercer bimestre de 1997, se abonarán para cubrir sus pensiones.

"Como se aprecia, los mencionados trabajadores están impedidos para solicitar directamente al Infonavit la entrega de los recursos de su subcuenta de vivienda, por lo que se han visto obligados a demandar a las instituciones para que les sean entregados sus propios recursos, con los costos adicionales que esto les genera.

"Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la disposición referente a que las aportaciones subsecuentes al tercer bimestre de 1997 se abonen para cubrir dichas pensiones, salvo que haya consentimiento expreso del trabajador para que los fondos de dicha subcuenta se destinen al pago de su pensión.

"Lo anterior ha ocasionado múltiples juicios contra el Infonavit y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con ello altos costos judiciales tanto para los trabajadores como para las instancias demandadas, además de afectar la operación del instituto.

"En este sentido, y en congruencia con las iniciativas presentadas por diversos legisladores de distintos grupos parlamentarios que plantean un procedimiento para que los trabajadores recuperen los recursos de la subcuenta de vivienda de 1997, se propone establecer un mecanismo que permita a los trabajadores recuperar los recursos remanentes en su subcuenta de vivienda, de forma consistente con los fines de la seguridad social mencionados en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Por ello, a fin de que los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados a un crédito de vivienda se entreguen directamente a los trabajadores, se propone que dichos recursos y rendimientos sean entregados al trabajador en una sola exhibición, con plazos específicos y de conformidad con el procedimiento que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general.

"Con la reforma que se propone se garantiza sin duda el derecho de los trabajadores a recibir con la mayor brevedad los recursos de su subcuenta de vivienda que no hayan sido aplicados a un crédito y a su vez se disminuirán los costos y erogaciones judiciales a los trabajadores y al instituto, permitiéndole destinar mayores recursos en beneficio del trabajador. …"

38. Se precisó que los párrafos tercero y cuarto del artículo octavo transitorio reformado, describen las condiciones en que procederá la entrega de los recursos de vivienda correspondientes al cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y posteriores; sobre la premisa fundamental de que el párrafo segundo ordena expresamente que esos recursos sean entregados a los trabajadores en una sola exhibición.

39. Lo anterior, porque en el aludido párrafo tercero se explica:

» Los trabajadores que hayan demandado la entrega de los recursos de vivienda del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, en adelante.

» Antes de la entrada en vigor de la norma transitoria reformada.

» Que hayan obtenido sentencia a favor sin ejecutarse, o

» El juicio respectivo esté en trámite y desistan.

» Les serán entregados los recursos y sus rendimientos generados hasta el momento de su traspaso al Gobierno Federal, en una sola exhibición.

40. Y, en el párrafo cuarto, se describe:

• Los trabajadores que se hayan pensionado del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, al doce de enero de dos mil doce, conforme al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

• Incluso, los que hayan demandado y obtenido resolución en contra.

• Recibirán los recursos y sus rendimientos en un plazo máximo de dieciocho meses, contado a partir de la entrada en vigor del artículo octavo transitorio reformado.

• Conforme al procedimiento que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que expedirá en un plazo de ciento ochenta días naturales.

41. De manera que –se concluyó– de la interpretación armónica de los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, reformado mediante diverso decreto publicado en ese medio de difusión, el doce de enero de dos mil doce, deriva que:

42. Se indicó que todos los trabajadores que se pensionen antes del doce de enero de dos mil doce, bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, recibirán en una sola exhibición los recursos de vivienda correspondientes al cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y posteriores, en un plazo de dieciocho meses, contado a partir de que entró en vigor el artículo octavo transitorio reformado; sin que obste la circunstancia de que el plazo aludido se mencione sólo en el párrafo cuarto, ya que dicha porción normativa únicamente describe el escenario relacionado con los trabajadores que demandaron y obtuvieron sentencia en contra, sin pretender la circunscripción del plazo de referencia sólo a ese caso.

43. Es decir, en ese universo de trabajadores, se encuentran incluidos los que hayan demandado la entrega de los recursos de vivienda, y que tengan sentencia favorable sin ejecución, o en contra, o cuyo juicio esté en trámite, así como los que no hayan promovido demanda alguna.

44. Esto se entiende así, en principio, porque si bien en el tercer párrafo se hace alusión a los trabajadores con sentencia favorable sin ejecutarse o con juicio en trámite, y se señala que desistan para que les sean entregados los recursos; lo cierto es que, el desistimiento del juicio no puede entenderse como condición para la entrega, sino como acto potestativo que puede o no presentarse, debido a que el sentido genérico de la norma es que todos los trabajadores reciban los recursos de vivienda del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y posteriores, por tanto, la entrega no puede estar

condicionada a que desistan del juicio que está en trámite, porque esta interpretación haría nugatoria la reforma al artículo transitorio en estudio, que pretendía la entrega sin condición alguna de los mencionados recursos a todos los trabajadores pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete.

45. Esto es, en dicha porción normativa el legislador tan sólo dejó plasmado uno de los escenarios en los que pueden encontrarse los trabajadores en el momento en que entró en vigor el artículo octavo transitorio reformado el doce de enero de dos mil doce, porque se trata de la circunstancia en que se encuentran quienes han demandado en juicio la entrega de los recursos de la subcuenta de vivienda del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete y posteriores, y eventualmente decidan desistir del juicio correspondiente, lo cual constituye ciertamente una mera probabilidad, porque en la porción normativa en comento se hace referencia a las demandas contra el artículo octavo transitorio, en su redacción anterior [publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete], que establecía que las aportaciones subsecuentes al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete y los rendimientos que se hubieren generado se abonarían para cubrir las pensiones.

46. Además, se entiende que están incluidos los trabajadores que iniciaron juicio y obtuvieron sentencia favorable o cuyo juicio está en trámite, porque el cuarto párrafo, al identificar a los trabajadores que se pensionaron del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, al doce de enero de dos mil doce, claramente señala que, están incluidos los que hayan demandado y obtenido resolución en contra.

47. De manera que, si esta porción normativa incluye a los trabajadores que demandaron y obtuvieron sentencia en contra, con mayor razón debe entenderse que están considerados por la norma aquellos que demandaron y obtuvieron sentencia favorable o cuyo juicio esté en trámite, así como los que no promovieron juicio alguno.

48. Hasta aquí la cita, de las consideraciones de los asuntos indicados (amparos en revisión 654/2012, 699/2012, 738/2012, 754/2012 y 718/2012).

49. Lo expuesto permite advertir que la situación jurídica de las personas que demandaron la devolución y entrega de los recursos de vivienda ***antes*** de la entrada en vigor del decreto publicado el doce de enero de dos mil doce [trece de enero de dos mil doce], es distinta de quienes demandaron esa devolución ***después*** de esa fecha, en lo que atañe al problema relativo de a

quién corresponde la obligación de hacer la entrega directa de esos recursos, si al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o a la administradora de fondos para el retiro correspondiente (Afore).

50. En efecto, como se puso de manifiesto, el propósito de la reforma fue agilizar la entrega de los recursos de vivienda, por conducto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, entre otros supuestos, para aquellos trabajadores que hubiesen demandado la devolución de los recursos de vivienda ***antes*** del trece de enero de dos mil doce (fecha en que entró en vigor la reforma al mencionado artículo octavo transitorio), y que a esa fecha, su juicio estuviese en trámite.

51. En ese tenor, si los asuntos laborales iniciaron ***antes*** del trece de enero de dos mil doce, fecha en que entró en vigor la reforma al artículo octavo transitorio, entonces corresponde al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entregar a los trabajadores los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda, ello conforme al texto del citado artículo octavo transitorio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce, que constituye una norma general que prevé el procedimiento relativo para la entrega de dichos fondos, debiendo destacarse que la norma es, en sí misma, retroactiva porque rige hacia el pasado, según se puede inferir del análisis de su texto que ha hecho esta Segunda Sala, expuesto en líneas anteriores.

52. Cabe hacer notar que la norma en tránsito prevé un procedimiento administrativo que resulta ser evidentemente distinto a lo que prevé el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, resultando ser aplicable aquélla, porque su origen se debe precisamente a que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la ley relativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete.

53. No es obstáculo para la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 2a./J. 15/2009, emitida por esta Segunda Sala de rubro: "SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.", en razón de que dicho criterio se emitió con antelación a la citada reforma del artículo octavo transitorio (reformado por decreto publicado

en el Diario Oficial de la Federación el doce de enero de dos mil doce), puesto que aprobada por esta Segunda Sala el dieciocho de febrero de dos mil nueve.

54. En cambio, en principio, es distinta la situación en los juicios laborales que iniciaron a partir del trece de enero de dos mil doce, respecto de los cuales pareciera que no resulta aplicable el artículo octavo transitorio reformado, en la parte que ordena al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores hacer la entrega de los recursos, porque esa norma de tránsito no previó expresamente el supuesto de aquellos trabajadores que presentaran demanda ***después*** del inicio de su vigencia.

55. De manera que en este tipo de asuntos, operaría el contenido del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que establece:

(Reformado, D.O.F. 6 de enero de 1997)
"**Artículo 40.** Los fondos de la subcuenta de vivienda que no hubiesen sido aplicados de acuerdo al artículo 43 Bis, serán transferidos a las administradoras de fondos para el retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega, según proceda, en los términos de lo dispuesto por las Leyes del Seguro Social, en particular en sus artículos 119, 120, 127, 154, 159, 170 y 190, 193 y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente, en sus artículos 3, 18, 80, 82 y 83.

"A efecto de lo anterior, el trabajador o sus beneficiarios deberán solicitar al instituto la transferencia de los recursos de la subcuenta de vivienda a las administradoras de fondos para el retiro. El instituto podrá convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social los términos y requisitos para simplificar y unificar los procesos para autorizar la disponibilidad de los recursos a que se refiere el párrafo anterior.

56. Conforme al precepto antes reproducido, los recursos de vivienda serán entregados por conducto de las administradoras de fondos para el retiro (Afores).

57. A primera vista pareciera que en los juicios laborales que se iniciaron con posterioridad, esto es, ***después*** a la entrada en vigor del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de enero de dos mil doce, en los que se demandó la entrega y devolución de los recursos de vivienda, resultaría aplicable, como regla general, el contenido del artículo 40 de la Ley del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cuanto ordena la entrega de esos recursos por conducto de las administradoras de fondos para el retiro (Afores).

58. Así, en apariencia resultaría aplicable la regla general prevista en el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en todos aquellos casos en que no lo fuera el artículo octavo transitorio reformado, esto es, cuando los trabajadores presenten su demanda después del inicio de su vigencia (ello entendiendo la norma en tránsito literalmente en estricto sentido en tanto no previó expresamente el supuesto de aquellos trabajadores que presentaran demanda después del inicio de su vigencia), y en ese supuesto regiría la jurisprudencia 2a./J. 15/2009 que a continuación se reproduce (cuyo rubro se citó en líneas anteriores), aprobada por esta Segunda Sala el dieciocho de febrero de dos mil nueve:

"SUBCUENTA DE VIVIENDA. LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN ELLA SON ADMINISTRADOS POR EL INFONAVIT Y, EN CONSECUENCIA, PARA QUE SEAN ENTREGADOS AL TRABAJADOR O, EN SU CASO, A SUS BENEFICIARIOS, ES NECESARIO QUE AQUÉL LOS TRANSFIERA A LA AFORE CORRESPONDIENTE.—Conforme al artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuentas individuales de los trabajadores se integran por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro. Por otra parte, el artículo 123, apartado A, fracción XII, primer y segundo párrafos, de la Constitución General dispone que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es el encargado de administrar los recursos depositados en dicho fondo y, en consecuencia, es quien administra los recursos correspondientes a la subcuenta de vivienda. Por tanto, cuando un particular reclame de la empresa administradora de fondos la devolución del saldo de la misma, dicho instituto debe hacer la transferencia correspondiente a la referida subcuenta, a efecto de que tales recursos, cuando proceda, puedan entregarse al trabajador o, en su caso, a sus beneficiarios." (Novena Época. Núm. Registro digital: 167827. Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIX, febrero de 2009, materia laboral, tesis 2a./J. 15/2009, página 464)

59. Sin embargo, el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aun cuando no haya sido reformado, no resulta ya aplicable, en tanto que dicha disposición se encontraba dentro de la lógica del sistema normativo concerniente al artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación

el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que fue declarado inconstitucional por esta Segunda Sala, jurisprudencia 2a./J. 32/2006, de rubro: "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." (cuyo texto se reprodujo en líneas anteriores), entonces es claro que ya no tiene razón de ser que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores transfiera a las administradoras de fondos para el retiro los recursos en comento. Es el instituto el que, al tener la tenencia de los recursos de los trabajadores (al corresponderle precisamente la administración de los fondos), debe hacer la devolución directamente, ello como consecuencia lógica de la inconstitucionalidad de referencia.

60. De ahí que en todos los casos corresponda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores hacer entrega de los fondos de vivienda (con la salvedad, claro está, de que ya haya efectuado la transferencia a una entidad financiera, pues lo que cobra relevancia es la pronta devolución de los recursos a los trabajadores).

61. No está de más señalar, que esta Segunda Sala, al resolver la diversa **contradicción de tesis 137/2014**, en sesión de trece de agosto de dos mil catorce, por unanimidad de cuatro votos, ausente el Ministro Sergio A. Valls Hernández, determinó que no existía oposición de criterios entre el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región (igualmente contendiente en la presente contradicción de tesis) y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, estableciendo al efecto que las soluciones que hallaron los órganos colegiados se encontraban justificadas, en tanto que se puso de manifiesto que "*la situación jurídica de las personas que demandaron la devolución y entrega de los recursos de vivienda* ***antes*** *de la entrada en vigor del decreto publicado el doce de enero de dos mil doce, respecto de la persona jurídica que deberá hacer la entrega directa de esos recursos (Infonavit o Afore), es distinta de quienes demandaron esa devolución* ***después*** *de esa fecha*."

62. No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, existe oposición de criterios entre lo sustentado por varios tribunales cuyos juicios de amparo tuvieron su origen ***antes*** del indicado trece de enero de dos mil doce, así como también, existe contradicción entre diversos órganos colegiados cuyos juicios de amparo tuvieron su origen después de la referida fecha, de ahí que en este asunto, resultó posible examinar la oposición de posturas en los términos expuestos.

63. Por los motivos antes señalados, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el siguiente criterio:

FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997", DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012. El propósito de la reforma inicialmente citada fue agilizar la entrega de los recursos de vivienda, por conducto del Infonavit, a los trabajadores que hubiesen demandado su devolución antes del 13 de enero de 2012 (día en que entró en vigor la reforma al artículo octavo transitorio mencionado) y cuyo juicio estuviese en trámite; sin embargo, el precepto reformado no previó expresamente el supuesto de los trabajadores que presentaran su demanda después del inicio de su vigencia. No obstante lo anterior, es inaplicable el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme al cual, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) entregarán los recursos de vivienda, pues a pesar de que dicho numeral no se ha reformado, se encuentra dentro de la lógica del sistema normativo del artículo octavo transitorio del decreto de reformas al ordenamiento indicado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, el que fue declarado inconstitucional por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 2a./J. 32/2006 (*); de ahí que ya no tiene razón de ser que el Infonavit transfiera a las Afores los recursos en cita, sino que éste, al tener los recursos de los trabajadores por corresponderle su administración [como se señala en la contradicción de tesis 25/2006-SS (**) resuelta por esta Segunda Sala], debe devolverlos directamente, como consecuencia de la inconstitucionalidad referida, independientemente de que la demanda se hubiera presentado antes o después de la entrada en vigor del decreto de reformas al artículo octavo transitorio. De ahí que en todos los casos corresponda al Infonavit entregar los fondos de vivienda con la salvedad, claro está, de que haya efectuado la transferencia a una entidad financiera, pues lo relevante es la pronta devolución de los recursos a los trabajadores.

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2006 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 252, con el rubro: "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY

RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

(**) La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 25/2006-SS citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 954.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Existe la contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los tribunales antes mencionados; envíense la indicada jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, conforme al artículo 219 de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza (ponente), José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y presidente Alberto Pérez Dayán.

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997", DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012. El propósito de la reforma inicialmente citada fue agilizar la entrega de los recursos de vivienda, por conducto del Infonavit, a los trabajadores que hubiesen demandado su devolución antes del 13 de enero de 2012 (día en que entró en vigor la reforma al artículo octavo transitorio mencionado) y cuyo juicio estuviese en trámite; sin embargo, el precepto reformado no previó expresamente el supuesto de los trabajadores que presentaran su demanda después del inicio de su vigencia. No obstante lo anterior, es inaplicable el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme al cual, las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) entregarán los recursos de vivienda, pues a pesar de que dicho numeral no se ha reformado, se encuentra dentro de la lógica del sistema normativo del artículo octavo transitorio del decreto de reformas al ordenamiento indicado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, el que fue declarado inconstitucional por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 2a./J. 32/2006 (*); de ahí que ya no tiene razón de ser que el Infonavit transfiera a las Afores los recursos en cita, sino que éste, al tener los recursos de los trabajadores por corresponderle su administración [como se señala en la contradicción de tesis 25/2006-SS (**) resuelta por esta Segunda Sala], debe devolverlos directamente, como consecuencia de la inconstitucionalidad referida, independientemente de que la demanda se hubiera presentado antes o después de la entrada en vigor del decreto de reformas al artículo octavo transitorio. De ahí que en todos los casos corresponda al Infonavit entregar los fondos de vivienda con la salvedad, claro está, de que haya efectuado la transferencia a una entidad financiera, pues lo relevante es la pronta devolución de los recursos a los trabajadores.

2a./J. 20/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 249/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, Noveno, Décimo Primero y Décimo Segundo, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila y el entonces Cuarto de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. 18 de febrero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis VIII.3o.(X Región) J/1 (10a.), de título y subtítulo: "INFONAVIT. POR SU CONDUCTO CORRESPONDE LA DEVOLUCIÓN DE LOS FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, AUN CUANDO EL DERECHO A EXIGIRLA HAYA NACIDO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ENERO DE 2012 (APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO).", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas y en la *Gaceta* del *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 1935, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver los amparos directos 359/2014 y 483/2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 58/2013, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 56/2013, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 1491/2012, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo directo 109/2013.

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 32/2006 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 252, con el rubro: "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

(**) La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 25/2006-SS citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 954.

Tesis de jurisprudencia 20/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 8 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis en materia administrativa, en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la formuló el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyo criterio se estima en oposición.

TERCERO.—Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es preciso conocer los criterios emitidos por los órganos colegiados en cuestión y sus antecedentes.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

• El **doce de marzo de dos mil catorce**, ********** promovió demanda de **amparo indirecto** reclamando del administrador local de Servicios al Contribuyente de Naucalpan del Servicio de Administración Tributaria, un oficio por el cual se dio respuesta a su solicitud de aclaración de la carta invitación recibida con el fin de que regularizara su situación fiscal.

• El trece de marzo de ese año **el Juez de Distrito** del conocimiento **desechó de plano la demanda de garantías**, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, pues consideró que existía una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues la quejosa debió agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley común prevé, para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, pues si bien éste había sido emitido por una autoridad no considerada como tribunal judicial, administrativo o del trabajo; contra el acto procedía juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues no tenía carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto. De esta manera, el juzgador señaló que pese a que se reclamaran violaciones directas a la Constitución, también se advertía que la promovente se dolía de violaciones indirectas a ésta, aclarando que, en la especie, no operaba la excepción al principio de definitividad, pues era factible que la agraviada obtuviera la modificación, anulación o revocación del acto combatido a través del recurso ordinario, alegando los vicios de legalidad o violaciones constitucionales indirectas que ostentara la resolución. Asimismo, destacó que sólo la falta absoluta de fundamentación de un acto actualizaba la excepción referida, no como en el caso que se argumentaba una indebida fundamentación. Por último, enfatizó que si bien otra de las excepciones al principio de definitividad consiste en que conforme a las leyes que rigen el acto reclamado se exigen mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para la suspensión de la ejecución de éste, en la especie, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la suspensión de los actos sin exigir mayores requisitos que los establecidos en aquélla.

• Inconforme con ese acuerdo, la quejosa interpuso **recurso de queja (61/2014)**, el que se declaró **infundado** por el **Tribunal Colegiado de Circuito**, al considerar, en lo que interesa al presente estudio, que en el caso no se actualizaba ningún supuesto de excepción al principio de definitividad que hiciera procedente la demanda de amparo, porque la ley que regula el medio de defensa ordinario contra el acto reclamado, no establecía mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, porque en términos de los artículos 112 y 139 de ésta, el órgano que conozca del jui-

cio debe proveer sobre la suspensión provisional de los actos reclamados que proceda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que recibe la demanda. Por su parte, el inciso c) de la fracción III del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, lo que es equiparable a la Ley de Amparo, de tal manera que si la suspensión se solicita en la misma demanda, ésta deberá acordarse en el día hábil siguiente, que se equipara a las veinticuatro horas que prevé la Ley de Amparo, pues en ambos ordenamientos se establece la posibilidad de conceder la medida precautoria de manera inmediata.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito

• El **quince de julio de dos mil trece**, ********** promovió demanda de **amparo indirecto** reclamando del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Puebla y otras autoridades, la orden verbal o escrita, la orden de dar de baja o revocación de tres registros patronales, asignados a la quejosa por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• El diecisiete de julio de dos mil trece, el **Juez de Distrito** del conocimiento desechó la demanda de garantías por su manifiesta e indudable improcedencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sobre la base de que la promovente debió haber agotado el medio de defensa consistente en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues es éste el encargado de resolver controversias suscitadas entre los patrones y demás sujetos obligados y el citado organismo, aunado a que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante dicho tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, en sus numerales 125, 128, 129, 132 y 135.

• Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso **recurso de queja (74/2013)**, en el cual, a través de una decisión mayoritaria del **Tribunal Colegiado de Circuito,** se ordenó **revocar** el auto recurrido **y admitir la demanda de amparo**, sobre la base de que los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo sostienen que el pronunciamiento sobre la suspensión provisional del acto reclamado se debe hacer en el momento de la presentación de la demanda de amparo, cuya decisión sobre su admisión o desechamiento es tomada por el Juez de Distrito en el lapso de veinticuatro horas, contadas desde que la demanda fue presentada, o turnada al juzgador; empero, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo (vigente desde el diez de marzo de dos mil once) establece que la solicitud de suspensión de ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, presentada por el actor, se tramitará y resolverá, entre otras reglas, conforme al procedimiento en que se establece que el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; por consiguiente, si en el juicio de amparo el lapso se computa de momento a momento y descontando las horas de los días inhábiles para el órgano jurisdiccional que transcurren en ese lapso, es indudable que en el artículo 28 se exigen mayores requisitos, pues la decisión puede tomarse a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud de la suspensión, teniendo como limitante el horario de labores para el personal con actividad jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que lo son de las nueve horas a las dieciséis horas del día hábil; luego, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo excede en este punto el lapso para la suspensión provisional del acto a la Ley de Amparo vigente; de esta manera, contrario a lo resuelto en el auto recurrido, en razón de la falta de expeditez en el trámite de la suspensión provisional del acto impugnado, no existe obligación por parte de la quejosa de agotar el juicio contencioso administrativo de forma previa al juicio de amparo.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas

• **(Amparo en revisión 531/2012)** Por escrito presentado el **veintiocho de octubre de dos mil once**, ********** promovió demanda de amparo indirecto reclamando del Consejo de Profesionalización del Servicio de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República y otras autoridades, el procedimiento administrativo instaurado en su contra.

• El treinta y uno de enero de dos mil doce el **Juez de Distrito** decretó el sobreseimiento en relación con algunas autoridades y concedió la protección constitucional solicitada.

• La agente del Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de revisión contra esa decisión.

• **(Amparo en revisión 702/2012)** Por escrito presentado el **ocho de noviembre de dos mil once**, ********** promovió demanda de amparo indirecto reclamando del delegado de la Secretaría de Economía en el Estado de Michoacán y otras autoridades, la resolución por medio de la cual se niega un permiso de importación de gas propano.

• El diez de abril de dos mil doce el **Juez de Distrito** dictó sentencia en la que decretó el sobreseimiento en el juicio.

• Inconforme con ese fallo, la quejosa interpuso recurso de revisión.

• **(Amparo en revisión 471/2012)** Por escrito presentado **el cinco de diciembre de dos mil once**, ********** y otras promovieron demanda de amparo indirecto reclamando de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Estado de Michoacán y otras autoridades, el oficio donde se les comunicó la reducción de sus pensiones.

• El veintisiete de febrero de dos mil doce el **Juez de Distrito** dictó sentencia en la que negó la protección constitucional solicitada.

• Inconformes con esa determinación, las quejosas interpusieron recurso de revisión.

• En sesiones del veintiuno de junio y veinte de septiembre de dos mil doce, **el Tribunal Colegiado de Circuito** resolvió los tres asuntos citados pronunciándose en la forma conducente; empero, en lo que respecta al tópico de que trata la presente contradicción de tesis, emitió idéntico criterio en el siguiente sentido:

- A partir de la reforma constitucional que entró en vigor el cuatro de octubre de dos mil once, a fin de dilucidar si la parte quejosa debe o no agotar el medio de defensa ordinario antes de acudir al juicio de amparo, el Juez de Distrito debe considerar lo concerniente al plazo en que se establece el otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado, tanto en el juicio constitucional, como en la ley respectiva que rige el medio de defensa, cuidando que el que se establezca en ésta no sea mayor al que prevé la ley reglamentaria en cita.

- El artículo 130 de la Ley de Amparo sostiene que el pronunciamiento sobre la suspensión provisional del acto reclamado se hará en el momento de la presentación de la demanda, cuya decisión sobre su admisión o desechamiento por parte del Juez es tomada en el lapso de veinticuatro horas, como se deduce del diverso numeral 148 de la misma ley.

- Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente desde el diez de marzo de dos mil once, señala que la solicitud de suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor, se tramitará y resolverá, entre otras reglas, conforme al procedimiento en que se establece que el

Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.

- Mientras en la Ley de Amparo la decisión de la suspensión provisional es dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del escrito de demanda; en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ese periodo se prolonga por todo el día siguiente, es decir, el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece un plazo mayor que el que establece la Constitución Federal para el otorgamiento de la suspensión provisional, cuya reglamentación está en la Ley de Amparo, en específico, en sus artículos 124 y 125.

- Por razón de la falta de expeditez en el trámite de la suspensión del acto impugnado en comparación con lo establecido en la Ley de Amparo, no existe la obligación de los promoventes de agotar el principio de definitividad de forma previa al juicio constitucional.

CUARTO.—De los antecedentes narrados y las decisiones de los órganos colegiados de que se trata se advierte que la contradicción de tesis sólo existe entre los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, pues ambos se pronunciaron respecto de la misma problemática y analizaron idénticas disposiciones legales, emitiendo criterios divergentes, no así el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, pues si bien este último, como los otros dos órganos jurisdiccionales, analizó si el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece un plazo mayor para conceder la suspensión del acto reclamado que el previsto en la Ley de Amparo, lo cierto es que los tres asuntos que resolvió se promovieron bajo la vigencia de la anterior Ley de Amparo y con base en ésta llevó a cabo su estudio comparativo, siendo que los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Primero del Segundo Circuito y Tercero del Sexto Circuito estudiaron la Ley de Amparo vigente.

Esa precisión evidencia, por ende, que no existe contradicción de tesis con el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, al resolver los amparos en revisión 471/2012, 531/2012 y 702/2012, pues aun cuando se considerara que la modificación de la Ley de Amparo en relación con la anterior fue menor y reiteró, en esencia, las mismas disposiciones, lo cierto es que se trata de un ordenamiento legal diferente, aunado a que pese a que se advirtiera la importancia de incorporar el criterio emitido por ese órgano colegiado para dar certeza jurídica por tratarse de una misma problemática, es indispensable

aclarar que el quince de mayo de dos mil trece, la Segunda Sala ya resolvió la contradicción de tesis 164/2013, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Ministro presidente Sergio A. Valls Hernández, que contiene un pronunciamiento al respecto, porque en ese asunto se analizó, entre otros aspectos, la comparación entre el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la anterior Ley de Amparo, para verificar si aquélla establecía mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, dando origen a la siguiente jurisprudencia:

"Décima Época
"Registro IUS: 2004553
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 2
"Materia: común
"Tesis: 2a./J. 130/2013 (10a.)
"Página: 1446

"PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.—El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si pre-

viamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."

En las relatadas condiciones, ya se emitió una jurisprudencia que contiene un criterio en relación al tópico que ahora se presenta, de ahí que la divergencia de posturas sólo existe entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, pues mientras el primero sostiene que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la Ley de Amparo vigente se establecen plazos similares para conceder la suspensión, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la forma en que el legislador señaló el lapso dentro del cual se debe conceder la suspensión, pero que no dan lugar a que el juicio de amparo indirecto sea procedente, ya que previo a su promoción debe cumplirse con el principio de definitividad; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó lo contrario, esto es, que el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé un plazo mayor al de la Ley de Amparo en vigor para conceder la medida cautelar, por lo que opera una excepción al principio de definitividad y puede acudirse directamente a la promoción del juicio de garantías.

En esa tesitura, es incuestionable que en relación con la misma cuestión, emitieron posiciones o criterios jurídicos opuestos, siendo aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."[1]

QUINTO.—El tópico a resolver, por tanto, estriba en **determinar si el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé un plazo mayor que el establecido en la Ley de Amparo vigente para conceder la suspensión de los actos reclamados**.

Para hacer un pronunciamiento al respecto es preciso conocer el texto del citado artículo 28, así como de las disposiciones relativas de la Ley de Amparo, a saber:

---

[1] Novena Época. Registro digital: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo	Ley de Amparo vigente
"Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos:	"Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (Adicionado, D.O.F. 14 de julio de 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica

1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como	imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. …"

las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado instructor o quien lo supla. **III. El procedimiento será:** a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado instructor. **c) El Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud**. d) El Magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o ne-	"Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. …" "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. …" "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un aná-

gado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad."	lisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los inte-

	resados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." "Artículo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. …"

El artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado mediante decreto publicado el diez de diciembre de dos mil diez, dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal y que ésta se concede:

• Si no se afecta el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, a más que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución.

• En caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, sólo si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos, garantía que puede reducirse si el monto de los créditos excede la capacidad económica del solicitante o se trata de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria con el pago del crédito impugnado.

• Si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la garantía se fija discrecionalmente.

• Si la medida cautelar puede causar daños o perjuicios a terceros, se concede si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause.

• La suspensión del acto combatido queda sin efectos si el tercero otorga contragarantía.

• La medida cautelar se puede solicitar en cualquier etapa del juicio de nulidad.

En lo que interesa al presente análisis, la norma legal en cuestión señala que el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud.

Por su parte, la Ley de Amparo establece respecto de la suspensión de los actos que se decreta:

a) Si la solicita el quejoso.

b) Si no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público.

c) Si se pide en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

d) Si se aduce un interés legítimo, pero se acredita el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

e) Cuando pueda ocasionarse daño o perjuicio a tercero se concede si se otorga garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que pudieran causarse.

f) Si la suspensión afecta derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, se concede si el órgano jurisdiccional fija discrecionalmente el monto de la garantía.

g) Si se solicita contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, se concede si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; garantía que puede reducirse o dispensarse si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste quedó firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; si el monto de los créditos excede la capacidad económica del quejoso; y si se

trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito.

Y, por lo que hace al plazo en que el Juez de Distrito debe pronunciarse en relación con la medida cautelar en comento, en realidad la Ley de Amparo no señala uno específico, sino que éste se advierte del análisis relacionado de los artículos 112 y 139 que prevén que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, el órgano jurisdiccional debe resolver si desecha, previene o admite y que con la presentación de la demanda deberá ordenarse que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.

De esas precisiones se colige que el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no señala un plazo mayor que el previsto en la Ley de Amparo, para que el Magistrado instructor se pronuncie en relación con la suspensión del acto reclamado, pues su deber de conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, coincide, en esencia, con la obligación del juzgador de amparo de admitir, prevenir o desechar la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, ya que también la Ley de Amparo contempla las actuaciones en días hábiles, según se advierte de su artículo 19 que dispone:

"Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."

Además, si el punto de partida para asegurar que el Juez de amparo debe proveer respecto de la medida cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, deriva del artículo 112 antes reproducido, que alude al auto admisorio de la demanda de garantías, luego, es válido acudir a normas legales del trámite en general del juicio de amparo para concluir que acorde a lo previsto en el diverso numeral 22 de la Ley de Amparo, los plazos se cuentan por días hábiles.

No representa obstáculo a esta decisión que pudieran ser diferentes los horarios de labores para los que tramitan el juicio contencioso administrativo y los que proveen lo conducente en relación con el juicio de amparo, pues siempre está por encima la obligación en ambos supuestos, de acordar la medida cautelar de que se trata, dentro del plazo de veinticuatro horas una vez presentada la solicitud de suspensión, pues son acuerdos de término.

En este sentido, si acorde a lo previsto en los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el órgano que conozca del juicio debe proveer sobre la suspensión provisional de los actos reclamados que proceda dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que recibe la demanda; y el inciso c) de la fracción III del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; puede afirmarse que los plazos son equiparables, pues si la suspensión se solicita en la misma demanda, ésta deberá acordarse en el día hábil siguiente que es, en esencia, lo mismo que las veinticuatro horas que prevé la Ley de Amparo, pues en ambos ordenamientos se establece la posibilidad de conceder la medida precautoria de manera inmediata, ya que en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se establece, en torno a la suspensión, lo siguiente:

"Artículo 24. Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

"La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá de conformidad con el artículo 28 de esta ley.

"Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de acuerdo con la presente disposición jurídica y los artículos 25, 26 y 27 de esta ley.

"Durante los periodos de vacaciones del tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda."

En ese orden de ideas, si bien el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente establece en su fracción XX que el juicio de amparo es improcedente contra

actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, **ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional**; y el artículo 107 de la Constitución Federal ordena que en materia administrativa el amparo procede contra actos u omisiones que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa, siempre que la ley que rige éste no exija mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, **ni plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional**; entonces, la suspensión que prevé la Ley de Amparo tiene los mismos alcances que la medida cautelar contemplada en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues en ésta se resalta la ineludible obligación de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran hasta que concluya el proceso.

En otras palabras, la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "… ***y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional.***"

En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "… ***ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional*** …"

Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utilizan tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: **1)** los alcances; **2)** los requisitos; y, **3)** los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de defi-

nitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla y, por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares.

Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "***El Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud***."; lo cual significa que el tiempo en que demore en otorgarse la suspensión por parte del Magistrado instructor, en primer lugar, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios.

En segundo lugar, lo que este enunciado jurídico dispone, no tiene el propósito de señalar que en todos los casos la suspensión se concederá al día siguiente de la petición, sino que exclusivamente tiene la finalidad de fijar el extremo máximo en que debe obsequiarla el órgano jurisdiccional para no incurrir en responsabilidad.

Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de 24 horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme a los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita y, en su caso, provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo,

mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.

En efecto, existen diversos casos previstos en la propia Ley de Amparo en los que el lapso para proveer sobre la suspensión tiene que verse necesariamente incrementado. Por ejemplo, tratándose de las prevenciones que se dicten para desahogarse en 5 días (artículo 114); o los conflictos competenciales que se susciten, en los que el superior cuenta con 8 días para dirimirlos (artículo 48) e, inclusive, por la sola circunstancia de que sea inhábil el día siguiente al de la presentación de la demanda; supuestos todos ellos en los que el auto suspensional no cabe dictarlo dentro del lapso de 24 horas, y que pone de manifiesto que, examinadas en su conjunto estas disposiciones, se advierte que de lo que se trata es de que la premura que se busca no se aleje en forma ostensible de lo que prevé la Ley de Amparo, esto es, que a más tardar al día siguiente de la promoción del juicio se provea sobre la medida cautelar, en tanto que ni aun conforme a esta última ley, indefectiblemente en todos los asuntos la suspensión se resuelve dentro del plazo general que ella señala.

De esta forma, no hay razón alguna para estimar que en estos casos la forma de proceder del Magistrado instructor se aparte manifiestamente de lo que prevé la Ley de Amparo, respecto del lapso para ordenar la paralización de los actos reclamados, pues al disponer esta ley como la otra que se analiza, sendas fórmulas gramaticales que imponen la obligación de acordar sobre la medida cautelar antes que fenezca el día siguiente de la presentación de la demanda, es evidente que se tutela con la misma protección el derecho de los justiciables para que con celeridad se determine lo que corresponda.

Además, tampoco resulta sea necesario verificar cuál es el horario de labores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para saber con qué prontitud despachará su resolución, pues aun cuando tuviera un horario menor al de los Juzgados de Distrito, lo cierto es que esa posible diferencia, de cualquier forma no lo releva de su obligación de acordar al día siguiente dentro del espacio en que discurra su funcionamiento.

En esa tesitura, se concluye que la fracción III, inciso c), del artículo 28 analizado, al establecer que el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, no excede el plazo establecido en la Ley de Amparo en su artículo 112; por tanto, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad, consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución

General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, agotando el juicio de nulidad, dado que en este medio de defensa no se prevé un plazo mayor para pronunciarse en torno a la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo.

En mérito de lo hasta aquí expuesto, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes términos:

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "… y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "… ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional …". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las

autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.—No existe contradicción de tesis con el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas.

SEGUNDO.—Existe la contradicción de tesis denunciada entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

TERCERO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por la Segunda Sala, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del último considerando de esta resolución.

Notifíquese; remítanse testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece, a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, y hágase del conocimiento del Pleno y de la Primera Sala de esta Suprema Corte y de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en acatamiento a lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Alberto Pérez Dayán y Ministro presidente Luis María Aguilar Morales. El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente.

En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las

leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "… y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "… ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional …". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticua-

tro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.

2a./J. 19/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 177/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 8 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis VI.3o.A.36 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE TRATÁNDOSE DE AMPAROS PROMOVIDOS CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, AL PREVER EL ORDENAMIENTO QUE LO RIGE UN PLAZO MAYOR QUE ÉSTA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1816, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la queja 61/2014.

Tesis de jurisprudencia 19/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de febrero de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9.30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 301/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y CUARTO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 25 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diversos circuitos cuyo punto de contradicción versa sobre la materia administrativa y, además es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

Lo anterior, con apoyo en la tesis P. I/2012 (10a.),[1] sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal que se lee bajo el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPRE-

[1] Décima Época. Registro digital: 2000331. Instancia: Pleno. Tesis: aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9.

MA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).—De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a

los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito."

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de donde deriva la resolución cuyas consideraciones se estiman contradictorias.

TERCERO.—**Criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan posturas contradictorias.** A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones en que se apoyaron los órganos colegiados antes precisados, al dictar las respectivas ejecutorias.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el **recurso de revisión** ********** (interpuesto por la delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla, en contra de la sentencia de tres de marzo de dos mil catorce, dictada en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en ese Estado), emitió sentencia en sesión de catorce de agosto de dos mil catorce y en la parte que interesa, determinó:

"SÉPTIMO.—Análisis de la causa de improcedencia no estudiada por la Juez de Distrito.

"La recurrente arguye que la Juez de Distrito actuó ilegalmente al entrar al estudio del procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en esa medida, es que el fallo impugnado es incongruente dado que al no afectarle la omisión controvertida al quejoso no hay concordancia entre la parte considerativa y los resolutivos.

"Precisa que la tesis en que se apoyó la a quo hace alusión al derecho fundamental de petición, por lo que el fallo es incongruente, dado que la materia del juicio es responsabilidad administrativa y en este tenor es que no ponderó los alcances del criterio en que basó la resolución al no hacer una diferenciación entre lo que es el derecho a quejarse por la actuación de

un servidor público, con lo que es el derecho de hacer una petición a las autoridades.

"La autoridad responsable considera que el juicio de amparo es improcedente, en razón de que al tratarse de una queja administrativa no está dentro de los supuestos del derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, por lo que el peticionario carece de interés jurídico para reclamar en sede constitucional la omisión de la autoridad ante quien se presentó la denuncia de emitir el acuerdo respectivo y notificarlo al interesado.

"El ente gubernamental estima que la naturaleza de una queja administrativa tiene que ver con la facultad punitiva del Estado y en esa medida, el denunciante no está facultado para reclamar en amparo el que no se hayan ejercido las atribuciones de investigación y sanción en contra del servidor público denunciado.

"Es infundada la causa de improcedencia.

"Es verdad que conforme a lo ordenado en el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los Congresos Estatales, así como al Congreso de la Unión, el establecer leyes en materia de responsabilidad administrativa y que los procedimientos deberán desarrollarse autónomamente, en el entendido de que corresponde a la autoridad facultada la investigación y en su caso, sanción de los funcionarios que incurran en responsabilidad administrativa.

"De igual manera, este Tribunal Colegiado de Circuito no desconoce la existencia de la jurisprudencia 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación …

"Empero, ello no quiere decir que el denunciante carezca de interés jurídico para reclamar la omisión por parte de la autoridad encargada de conocer de las denuncias por responsabilidad, de dar respuesta al escrito a través del cual se hace de su conocimiento de hechos que pudieren constituir conductas infractoras.

"Esto es así, en virtud de que si el denunciante tiene el derecho a presentar una queja administrativa en contra de un servidor público por considerar que su actuación constituye una infracción a las leyes en materia de responsabilidad y por ello debe ser investigado, es inconcuso que cuenta con la prerrogativa de que la autoridad ante quien se presente la denuncia, le informe del trámite que le dio al escrito presentado.

"Se sostiene este aserto, con base en que el hecho de que el impetrante tenga facultades para presentar una denuncia, lleva aparejado su derecho a que la autoridad ante quien la hace valer, le informe del trámite que le dio, sin que ello signifique una transgresión a la facultad exclusiva punitiva con la que cuenta el Estado en materia de responsabilidades administrativas.

"En efecto, en la ejecutoria que corresponde al expediente de contradicción de tesis 139/2005-SS que generó la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sostuvo lo siguiente: (se transcribe).

"De lo anterior se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, analizó una problemática que tiene que ver con el caso, pero no está relacionada de manera directa a la planteada en este recurso de amparo en revisión.

"En efecto, como se desprende de la ejecutoria, el punto a dilucidar fue, si quien presenta una denuncia en contra de un servidor público tiene interés jurídico para combatir en amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa.

"Así las cosas, la diferencia que salta a la vista, es que el acto reclamado que generó el presente recurso de revisión no se trata de una decisión en torno a los hechos que se ponen en conocimiento de la autoridad encargada de investigarlos y, en su caso, determinar si son constitutivos de una infracción administrativa, sino que el motivo de la promoción del amparo es el silencio de la autoridad que recibió una queja administrativa.

"En este orden de ideas, en la contradicción de tesis ya hay un pronunciamiento por parte de la autoridad sancionadora, en el que ya sea de plano –desechamiento– o con posterioridad del desahogo del procedimiento –resolución final absolutoria–, considera que los hechos no constituyen causa de una infracción administrativa.

"En este supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el denunciante carece de interés jurídico para controvertir por medio del juicio de amparo la decisión mencionada en el párrafo anterior, porque quienes informan hechos probablemente constitutivos de causas de responsabilidad, aunque tienen la facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores

públicos, lo cierto es que no cuentan con el poder de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.

"La Segunda Sala consideró que lo anterior obedece a que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público en razón de que éste responde a intereses superiores de carácter público.

"Además, el órgano jurisdiccional de mérito, resolvió que la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con la finalidad de determinar con exactitud si el funcionario cumplió con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta.

"Ahora bien, el punto de encuentro que se aprecia entre los motivos de la ejecutoria y la problemática analizada en este recurso de revisión, es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el legislador impuso a todos los servidores públicos, la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias.

"Por ello, es que al ser el acto reclamado en este juicio, la omisión de emitir el acuerdo que corresponde a la queja que presentó el quejoso y la notificación correspondiente, es que se considera que en este supuesto el denunciante sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo.

"En efecto, el derecho subjetivo con que cuenta el peticionario de amparo, es el derecho a formular quejas y denuncias en contra de servidores públicos por incumplimiento a sus funciones, en el entendido de que la facultad o potestad de exigencia nace a partir de que todos los funcionarios están constreñidos a respetar y hacer respetar esa prerrogativa, tal como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo reconoce en la ejecutoria antes transcrita.

"Esto es así, en virtud de que el derecho a presentar la queja no se entendería ni tendría sentido, si la autoridad encargada de conocer los hechos no informa al promovente del destino que le dio a su ocurso, puesto que la facultad de informar a la autoridad competente de unos hechos que probablemente constituyan responsabilidad administrativa, lleva aparejado el derecho a saber el acuerdo que recae en ese aspecto.

"Esto no quiere decir que el denunciante tenga derecho a que necesariamente se admita a trámite su queja, mucho menos a constreñir a la autoridad competente a ejercer sus facultades de investigación y sanción, pues ello está dentro de la esfera de actuación del ente gubernamental, en la inteligencia de que en este punto es que se diferencia lo abordado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, dado que en el caso se está ante el silencio de la autoridad y en el supuesto de la contradicción de tesis, se parte de la base que la denuncia se desechó o se absolvió al servidor público, esto es, hay un pronunciamiento expreso.

"No obstante, la particularidad de que el denunciante carezca de interés en cuanto a la sustanciación y decisión final del procedimiento administrativo de responsabilidad, no quiere decir que no tenga el derecho a saber de la decisión que tomó la autoridad ante quien presentó su queja, en el entendido de que corresponde única y exclusivamente a la autoridad el decidir si inicia una causa, desecha o desestima los hechos que se ponen en su conocimiento, pero se insiste, que el silencio del ente gubernamental sí afecta el interés jurídico del denunciante, dado que no se entendería su derecho a quejarse si no se le informa qué acuerdo recayó a su queja.

"Se comparte la tesis siguiente:

"'QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO, CUANDO ALEGA SU FALTA DE PRONUNCIAMIENTO.'

"Ahora bien, la autoridad sustenta su causa de improcedencia en la tesis siguiente:

"'DERECHO DE PETICIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SE TRANSGREDE CUANDO NO SE INFORMA AL PROMOVENTE DEL TRÁMITE DADO A SU QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO.'

"El anterior criterio no se comparte, en virtud de que circunscribe el interés jurídico del denunciante al hecho de estar en aptitud de formular una queja y lo considera agotado una vez que el interesado presenta su escrito en donde hace del conocimiento de la autoridad de hechos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa.

"Esto es, estima que la prerrogativa de presentar una queja significa única y exclusivamente que la autoridad está constreñida a recibir el escrito

respectivo, sin que tenga la obligación de informar al promovente el acuerdo que recae al libelo.

"Este Tribunal Colegiado de Circuito considera, como lo ha precisado en párrafos anteriores, que el derecho a presentar una denuncia materia de responsabilidad administrativa es inocuo si no se informa al promovente del destino que se le da a su escrito, puesto que si se taza la facultad de denunciar como lo hace el Tribunal Colegiado en la tesis transcrita, no se estaría ante un derecho subjetivo, sino más bien, ante una mera facultad o potestad que el orden jurídico concede al particular, sin concederle un poder de exigencia imperativa, lo cual no es exacto, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en claro que todos los funcionarios están constreñidos a respetar y hacer respetar la facultad de denuncia.

"Así las cosas, se considera que no se está ante una mera facultad o potestad, sino ante un derecho subjetivo, el cual debe ser tutelado con la intensidad que su naturaleza lo permite, esto es, la protección a la facultad de denunciar no termina en el hecho de que se permita al particular presentar su escrito, sino debe hacerse extensiva a que la autoridad quede obligada a dar una respuesta al interesado, sin que quede vinculada a actuar en algún sentido específico, pero sí es necesario que dé a conocer al promovente el acuerdo que recayó a su escrito.

"Los derechos deben entenderse y abordarse desde una óptica protectora, y tutelarse para que éstos en realidad sean efectivos, por lo que en el caso la efectividad del derecho a denunciar se verifica una vez que la autoridad ante quien se presentó la queja se pronuncie sobre el trámite que dará al ocurso, pues en ese caso, se materializa la voluntad de la autoridad y con ello queda satisfecha la pretensión del quejoso.

"De otra manera, estaríamos ante el supuesto de una mera prerrogativa o potestad sin exigencia imperativa, dado que si el denunciante pone en conocimiento de la autoridad hechos probablemente constitutivos de responsabilidad, lo cierto es que tiene la facultad de exigir al ente gubernamental que se pronuncie, pues de otro modo, ese derecho no es efectivo ni tendría sentido, ya que es explorado derecho que toda promoción debe ser atendida por la autoridad, sin importar que se trate de una facultad exclusiva que pueda ejercer la autoridad.

"En este orden de ideas, se considera que contrario a lo que alega la autoridad responsable, el quejoso sí tiene interés jurídico para reclamar en

amparo la omisión del ente gubernamental en emitir el acuerdo y la notificación respectivos, ante la presentación de una queja en materia de responsabilidad administrativa.

"OCTAVO.—Estudio de los agravios que controvierten el fondo del asunto.

"La autoridad considera que con el acto reclamado no se vulnera en perjuicio del quejoso el artículo 8o. constitucional, en atención a que la naturaleza jurídica de esa prerrogativa es distinta a lo atinente de cuestiones de responsabilidad administrativa.

"Alega que como no se vulnera el artículo 8o. constitucional fue contrario a derecho que se concediera el amparo al quejoso, puesto que al no ser compatible el derecho fundamental de petición con las cuestiones de responsabilidad administrativa, lo jurídicamente correcto era que se negara el amparo al no violarse la disposición constitucional en cita.

"Hace valer que la Juez no distinguió las hipótesis que tutela el artículo 8o. constitucional, en relación con el procedimiento prescrito en los artículos 53 y 53 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en atención a que la juzgadora sostuvo que se vulneró en perjuicio del quejoso el derecho de petición, lo cual no es exacto, en razón de que la naturaleza de la queja administrativa se refiere a la imputación de conductas constitutivas de responsabilidad.

"Afirma que el acto reclamado no transgrede el artículo 8o. constitucional, en atención a que no se está en los supuestos estipulados en dicho ordenamiento, dado que no es válido ejercer la acción de amparo con el objeto de supervisar la prosecución de una denuncia en materia de responsabilidades administrativas, en virtud de que si bien es verdad cualquier interesado puede presentar quejas o denuncias, lo cierto es que está estipulado en favor del denunciante el derecho de exigir que se dé contestación a su escrito, así como a que se le cite para que ratifique la denuncia.

"Indica que la Juez Federal, de manera ilegal, matizó el contenido del escrito de queja con el objeto de que coincidiera con los supuestos del derecho de petición en el cual la autoridad sí tiene la obligación de acordar y dar contestación a lo que se le solicita, por ello, considera que se suplió la queja deficiente en favor del impetrante, no obstante que estamos en un asunto en materia administrativa.

"Lo anterior es infundado.

"No le asiste la razón a la autoridad responsable, en virtud de que si bien es verdad hay un matiz entre lo que es el derecho de petición propiamente dicho y el derecho a denunciar hechos constitutivos de responsabilidad administrativa, lo cierto es que esa diferencia no excluye ni veda la posibilidad de que se viole el derecho de petición.

"En efecto, el artículo 8o. constitucional dispone lo siguiente: (se transcribe)

"De una interpretación que redunde en una administración de justicia constitucional efectiva, se obtiene que el precepto transcrito, contrario a lo alegado, sí contempla dentro de sus supuestos, las cuestiones de responsabilidad administrativa.

"Esto es así, en virtud de que la única limitante del derecho de petición se circunscribe a la materia política, la cual está reservada a los ciudadanos, pero fuera de esa hipótesis la Constitución Federal no realiza restricción alguna y en esa medida, es válido incluir a la responsabilidad administrativa dentro de lo tutelado en el artículo 8o. constitucional.

"El único matiz que existe y que se ha dejado asentado anteriormente, es que la materia de responsabilidad en cuanto a su tramitación y decisión final, es una facultad exclusiva de la autoridad sancionadora, pero esto no colisiona con el derecho de que el ente gubernamental tenga la obligación de informar por escrito del acuerdo recaído a la queja.

"Se sostiene este aserto, con base en que, el que se obligue a la autoridad a que responda sobre el trámite que le dio al ocurso, de ninguna manera mina la facultad exclusiva que el ente gubernamental tiene para decidir potestativamente en cuanto al destino y fondo de los hechos que se someten a su consideración, pues no hay duda que la respuesta cualquiera que sea ésta no es controvertible por el denunciante.

"Así las cosas, el silencio de la autoridad en materia de responsabilidad administrativa, sí viola en perjuicio del denunciante el derecho de petición, puesto que la queja se hace ante autoridad, ésta debe formularse de manera respetuosa y por escrito, por tanto, al tener esos elementos distintivos, es claro que la autoridad queda vinculada para emitir una respuesta por escrito al denunciante, pues se insiste, no se vulnera con ello ni se invaden sus facultades sobre el destino que la autoridad de manera discrecional le dará al ocurso.

"Lo anterior, se refuerza con el hecho que apuntó la Juez de Distrito en la sentencia reclamada, pues como bien lo sostuvo el artículo 37, fracción XLIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Contraloría está obligada a recibir por sí o a través de sus delegaciones –como es el caso– las denuncias o quejas que le presenten los particulares en contra de los servidores públicos.

"Además, como lo hizo patente la a quo en el fallo controvertido, el artículo 53 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, dispone lo siguiente:

"'Artículo 53 Bis. La secretaría, los Ayuntamientos y los órganos de control que determinen las leyes, al conocer, investigar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50 de esta ley, iniciarán el trámite de la queja o denuncia bajo las disposiciones siguientes:

"'I. Las quejas o denuncias deberán presentarse por comparecencia directa o por escrito; en este último caso, el promovente deberá ser citado para que ratifique su promoción, en caso de que no sea ratificado se archivará el expediente correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad competente pueda darle seguimiento de oficio al asunto respectivo.'

"De lo anterior se desprende que, cuando un particular presenta una denuncia por escrito deberá ser citado para que ratifique su promoción, en el entendido de que si no acude a realizar esta conducta, la consecuencia es el archivo del expediente, sin demérito de que la autoridad competente pueda darle seguimiento de oficio a la causa.

"Esta redacción pone de manifiesto como lo sostuvo la Juez de Distrito, que sí se vulnera en perjuicio del quejoso el derecho de petición, puesto que al tratarse de una queja por escrito, es obligación de la autoridad ante quien se presentó el citar al promovente para que ratifique el escrito, de lo que se sigue, que la promoción de una queja administrativa conforme a la normatividad del caso, conlleva una obligación de hacer por parte de la autoridad.

"Esta obligación se patentiza porque lleva implícita una sanción ante el incumplimiento del particular, como lo es, que si no comparece a validar el ocurso que contiene los hechos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa, se archivará el expediente respectivo.

"Así las cosas, es claro que contrario a lo que asevera la recurrente, sí se vulnera en perjuicio del peticionario de amparo el derecho de petición,

dado que la ley que rige este asunto no solamente lleva aparejada la obligación de que la autoridad emita un acuerdo por escrito, sino que la constriñe a citar al particular como un requisito de viabilidad de la queja y por ello, es que el silencio del ente gubernamental sí transgrede el artículo 8o. constitucional, pues se insiste, que el hecho de que se trate de cuestiones de responsabilidad, no se excluye dada su naturaleza de la tutela del derecho de petición.

"Al ser infundados los agravios, se impone confirmar la sentencia controvertida. …"

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al resolver el **amparo directo** **********, en sesión de diecisiete de agosto de dos mil doce, en lo conducente, consideró lo siguiente:

"Como se anunció, resultan infundados los conceptos de violación que se analizan.

"Por otro lado, es igualmente infundado el restante motivo de inconformidad alegado por el quejoso, en el cual, sostiene medularmente que es incorrecto el ulterior sobreseimiento decretado por la autoridad jurisdiccional responsable, respecto del diverso acto reclamado por él, mismo que hace consistir en la omisión de darle a conocer el trámite o resolución que haya recaído a la queja administrativa presentada en contra de quien señaló únicamente como **********, el cual dice haber irrumpido en su negocio y realizar actos al parecer ilegales, alegando transgresión en su perjuicio del derecho de petición tutelado por el artículo 8o. constitucional.

"Efectivamente, respecto del acto recién destacado, el órgano jurisdiccional responsable, sostuvo que el actor **********, en su demanda de nulidad, atribuyó el acto omisivo destacado, a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a quien el quince de julio de dos mil once le fue turnado el escrito, mediante el cual, formuló queja administrativa el actor en contra de los supervisores que aduce irrumpieron en su negocio, mediante memorándum número **********, asignándose a tal queja el número de folio interno **********, y la cual, manifiesta el inconforme, a pesar de que en varias ocasiones ha preguntado por su trámite en dicha contraloría, sólo ha recibido como respuesta evasivas consistentes, en que en la fecha en la cual se resuelva, se le informará.

"Como se destacó al inicio del presente considerando, en torno a tal acto, el tribunal jurisdiccional responsable, sostuvo que el actor fue omiso en

llamar a juicio a la autoridad a quien señaló como responsable de que su derecho se vea conculcado, o sea, a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, puesto que a pesar de que en su demanda refirió que su queja administrativa la presentó en esa dependencia municipal y de que fue prevenido para que subsanara las deficiencias de su demanda, aun así fue omiso en pedir que se le llamara a juicio, razón por la cual, se estimó necesario sobreseer en el juicio, al declararse actualizada la hipótesis de improcedencia referida.

"Sin embargo, aun cuando en contra de la determinación adoptada por el tribunal de origen, el demandante hace valer que es ilegal la actuación desplegada por éste, porque considera que a pesar de no haber llamado a juicio como demandada a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, aun así subsiste la violación en su perjuicio de lo que denomina derecho de petición, dado que el escrito de queja administrativa que promovió, se encuentra dirigida específicamente al presidente municipal de Cuernavaca, por lo que no debió tomarse en cuenta únicamente que éste negó el acto reclamado, sino que en aras de salvaguardar sus derechos invocados, debió determinarse qué trámite siguió el escrito de queja de que se habla.

"Es infundado lo recién expuesto, atento a que de las constancias que integran el expediente del cual deriva la presente instancia, es posible desprender que el quejoso refirió en su demanda de nulidad, que el acto omisivo citado se atribuye a la 'Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos', además de manifestar que la queja administrativa que por escrito demostró haber formulado, se encuentra dirigida a Manuel Martínez Garrigós.—Presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por tanto, es a la contraloría municipal a quien debió señalar como autoridad demandada, y al no hacerlo así, es que se estima correcta la actuación de la autoridad responsable, puesto que, se repite, es obligación de la parte promovente designar y señalar expresamente a las autoridades en quien recaiga tal carácter; amén de que en la especie quedó demostrado que el tribunal de origen previno para tal efecto al demandante y éste no señaló a esa autoridad como demandada.

"A fin de apoyar lo dicho, se reproduce la primera página de la queja administrativa a que hace alusión el demandante, de la cual se desprende que ésta fue dirigida al presidente municipal referido, constando además el sello de recibido de la presidencia municipal de fecha once de julio de dos mil once, empero, sin que tal funcionario hubiere sido llamado al juicio contencioso de mérito, lo cual se constata con la siguiente imagen: …

"Por tanto, queda demostrado, que inversamente a lo expuesto por el solicitante del amparo, al ser la autoridad a quien atribuye el acto omisivo reclamado a la contraloría, a quien no señaló como autoridad demandada en sede contenciosa, es que el tribunal responsable correctamente sobreseyó en los términos expuestos.

"Ciertamente, al ser el propio demandante quien no designó como autoridad demandada, a quien imputa la omisión destacada, es que no resulta ilegal el sobreseimiento decretado; sin que exista obligación de parte del Tribunal Contencioso, para traer a juicio oficiosamente a las autoridades que no fueron señaladas con tal carácter por el inconforme.

"Sin que pase inadvertido para este órgano colegiado, la manifestación del solicitante del amparo relativa, a que estima transgredido en su perjuicio, el derecho de petición tutelado por el artículo 8o. constitucional, dado que a la fecha de interposición de su demanda de nulidad, ninguna noticia concreta había recibido en relación con el trámite y resolución que hubiere recaído al escrito de queja administrativa formulada por él; sin embargo, tal argumento tampoco prospera en beneficio del demandante.

"Esto es así, porque no obstante que el inconforme afirma que se ha conculcado su derecho de petición, apoyado esto en el escrito que presentó en contra de los servidores municipales que dice irrumpieron ilegalmente en su negocio, inversamente a lo expuesto, no se actualiza violación al artículo 8o. constitucional en perjuicio de quien presentó escrito de queja administrativa, que en este caso es el quejoso, por más que considere transgredido dicho numeral, pues lo que se ejerció por el inconforme es su facultad para formular queja o denuncia en contra de servidores públicos –funcionarios municipales–, por los actos que consideró ilegales, prerrogativa que en el caso apoyó en lo que dispone el artículo 18, inciso a), fracciones VI, VII, X y XI, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, invocado al inicio de su escrito de queja presentada el once de julio de dos mil once, en contra de quien señaló como **********, escrito respecto del cual, adujo no haber recibido noticia de su trámite o resolución, sino únicamente evasivas; respecto del cual, debe precisarse que el derecho a formular dicha queja se encuentra previsto por el numeral 25 del bando de policía citado, el cual confiere facultad a los habitantes de esta ciudad, para inconformarse en contra de las conductas de funcionarios municipales que se estimen ilegales.

"Pero debe señalarse, que por la omisión que refiere no puede estimarse actualizada alguna violación al artículo 8o. constitucional, pues quien

se inconforme en contra de actos de autoridad, vía queja administrativa, ejerce el derecho conferido al denunciante, para ello, mismo que se traduce en la facultad para formular queja, mediante la cual se inconforme en contra de actos que considere ilegales, provenientes de servidores o funcionarios públicos, pero no implica el derecho de petición que se aduce.

"Por tanto, el quejoso, quien tiene el carácter de denunciante por ser quien presentó escrito de queja administrativa, no tiene interés para reclamar la omisión de continuar con el trámite y resolución de la misma, es decir, para supervisar la prosecución de tal denuncia, puesto que su derecho a formular queja administrativa en contra de los servidores municipales en los términos que lo estimó conducente ha quedado colmado, y en ese sentido, carece de interés jurídico para supervisar el trámite y reclamar la omisión destacada.

"Ciertamente, el promovente de una queja administrativa carece de interés jurídico para reclamar la actuación de la autoridad instructora u omisión en que ésta haya incurrido dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa, y que considere como una dilación para resolver acerca de la misma, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental, salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias, por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.

"Con lo anterior, es posible afirmar que, en el caso, al haberse presentado por parte del inconforme su escrito de queja administrativa, mediante la cual puso en conocimiento de la autoridad municipal las conductas que estimó ilegales por parte del funcionario denunciado, es que se estima que su facultad o potestad de formular queja o denuncia por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos denunciados, ha quedado satisfecha, pero sin que se encuentre previsto en su favor, el poder de exigir de la autoridad ante quien se formuló dicha queja, una determinada conducta respecto de su pretensión.

"En vista de lo expuesto, resulta intrascendente la falta de comunicación al quejoso en torno al trámite dado o que siga la queja administrativa que planteó, puesto que al no asistirle interés jurídico para intervenir en el

trámite de la misma, es que en nada le afecta el sobreseimiento decretado en el juicio contencioso.

"De acuerdo con lo anterior, y al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, respecto de los actos reclamados por **********, en el juicio contencioso administrativo **********."

La ejecutoria que antecede, dio origen a la tesis aislada XVIII.4o.4 A (10a.), emitida por el citado órgano colegiado, visible en la página dos mil ciento nueve, Libro XIX, Tomo 3, de abril de dos mil trece, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, registro digital: 2003267, Décima Época, de rubro y texto siguientes:

"DERECHO DE PETICIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SE TRANSGREDE CUANDO NO SE INFORMA AL PROMOVENTE DEL TRÁMITE DADO A SU QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO.—Al promovente de una queja administrativa contra un servidor público no puede reconocérsele transgredido el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando no se le informa del trámite dado a aquélla, puesto que su derecho a formular la queja quedó colmado al realizar tal acto, sin que la ley prevea en su favor la posibilidad de exigir una determinada conducta respecto de su pretensión. Por tanto, el quejoso que se ubique en tal supuesto, no tiene interés jurídico para reclamar la actuación o inacción de la autoridad instructora, en el trámite y resolución de la misma, es decir, para supervisar la prosecución de tal denuncia."

CUARTO.—**Requisitos para que se actualice la contradicción de criterios y, de ser el caso, determinar el punto de derecho que no comparten los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados.** Previamente a establecer si efectivamente existen criterios disímiles sustentados entre los órganos colegiados precisados con anterioridad y, tal circunstancia, sea materia de estudio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de decidir cuál de ellos debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, se considera conveniente establecer que dicho supuesto se actualiza ante la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que al resolver los asuntos jurídicos se examinen cuestiones esencialmente iguales, y

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razones o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

Así, con la finalidad de corroborar si los anteriores requisitos se actualizan en la especie, es menester hacer un análisis de los asuntos que intervienen en la contradicción de posturas que se denuncia.

A. Los antecedentes de la resolución emitida por el **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito**, son los siguientes:

1. El veintisiete de noviembre de dos mil trece (foja 9) **********, **interpuso** ante el delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla, **recurso de queja administrativa** en contra del secretario, subsecretario y director de Administración de Concesiones y Permisos, todos de la Secretaría de Transportes de la citada entidad federativa, "... **por el retraso de proveer en relación con la solicitud de copias certificadas** ..."

2. El delegado de la Secretaría de la Contraloría en el sector transporte del Estado de Puebla, omitió pronunciarse en relación con el recurso de queja administrativa.

3. Inconforme, **********, promovió juicio de amparo indirecto, el que se registró con el expediente **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, el que por auto de dieciséis de enero de dos mil catorce, admitió la demanda y por sentencia de tres de marzo del citado año, concedió el amparo, al considerar que la autoridad responsable infringió el derecho de petición, en perjuicio del quejoso, ya que omitió pronunciarse en relación con el recurso de queja administrativa interpuesto el veintisiete de noviembre de dos mil trece.

4. No estando de acuerdo, el delegado de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Transportes del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, el que se registró con el toca **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el que por resolución de catorce de agosto de dos mil catorce, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo.

Las consideraciones en que se apoyó la decisión que antecede, en lo que interesa, fueron fundamentalmente las siguientes:

• Que contrariamente a lo aducido por la autoridad recurrente, el denunciante de una queja administrativa tiene interés jurídico para reclamar la omisión, por parte de la autoridad encargada de conocer de las denuncias por responsabilidad, de dar respuesta al escrito, a través del cual, se hacen de

su conocimiento los hechos que pudieren constituir conductas infractoras; ello, en virtud de que si el denunciante tiene el derecho de presentar quejas administrativas en contra de servidores públicos, cuenta con la prerrogativa de que la autoridad ante quien se presente la denuncia, le informe el trámite que le dio al escrito;

• Que el hecho de que el denunciante tenga facultades para presentar una denuncia, lleva aparejado el derecho a que la autoridad ante quien la hizo valer, le informe el trámite que le dio, sin que ello signifique una transgresión a la facultad exclusiva punitiva con la que cuenta el Estado en materia de responsabilidades administrativas;

• Que si bien, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.",[2] se analiza una problemática que tiene que ver con el caso, lo cierto es, que no está relacionada de manera directa, dado que el acto reclamado no se trata de una decisión relativa a determinar si los hechos son constitutivos o no, de una infracción administrativa; sino que el motivo de la promoción del amparo, es el silencio de la autoridad que recibió una queja administrativa;

• Que si en el criterio mencionado, esta Segunda Sala reconoció que el legislador impuso a todos los servidores públicos la obligación de respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias; entonces, el denunciante tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de la omisión de emitir el acuerdo y notificación relativa a la queja presentada;

• Que el derecho a presentar denuncias o quejas no tendría sentido, si la autoridad encargada de conocer los hechos, no informa al ocursante del destino que le dio al escrito, ya que la facultad de informar a la autoridad competente de los hechos que probablemente constituyan responsabilidad administrativa, lleva aparejado el derecho a saber el acuerdo que recae; lo que no implica que el denunciante tenga derecho a que necesariamente se deba admitir la queja, o que se ejerzan las facultades de investigación y sanción, dado que ello está dentro de las facultades de la autoridad;

---

[2] Novena Época. Registro digital: 176129. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, enero 2006, materia administrativa, tesis 2a./J. 1/2006, página 1120.

• Que la circunstancia de que el denunciante carezca de interés respecto a la sustanciación y decisión final del procedimiento administrativo de responsabilidad, no quiere decir que no tenga derecho a saber de la decisión que tomó la autoridad ante quien presentó la queja, en el entendido de que únicamente corresponde a la autoridad el decidir, si inicia el procedimiento, lo desecha o desestima;

• Que no se comparte el criterio contenido en la tesis aislada XVIII.4o.4 A (10a.), de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SE TRANSGREDE CUANDO NO SE INFORMA AL PROMOVENTE DEL TRÁMITE DADO A SU QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO.", ya que el derecho a presentar una denuncia de responsabilidad administrativa es inocuo si no se informa al promovente del trámite que se da al escrito, ya que si se clasifica la facultad de denunciar como se hace en ese criterio, no se estaría ante un derecho subjetivo, sino ante una mera facultad que el orden jurídico concede al particular, sin otorgarle una exigencia imperativa;

• Que la efectividad del derecho a denunciar implica, que la autoridad ante quien se presentó la queja se pronuncie sobre el trámite que le dará al recurso, puesto que con ello se materializa la voluntad de la autoridad y con ello queda satisfecha la pretensión del quejoso, de otra manera estaríamos en presencia de una mera potestad sin exigencia imperativa, es decir, el derecho no sería efectivo, ni tendría sentido; por lo que, el quejoso sí tiene interés jurídico para reclamar en amparo la omisión de emitir el acuerdo y la notificación ante la presentación de una queja, en materia de responsabilidad administrativa;

• Que si bien hay un matiz entre el derecho de petición y el derecho a denunciar hechos constitutivos de responsabilidad administrativa, lo cierto es que, esa diferencia no excluye ni veda la posibilidad de que se viole el derecho de petición;

• Que el artículo 8o. constitucional, sí contempla dentro de sus supuestos, las cuestiones de responsabilidad administrativa, siendo que la única limitante es en política; consecuentemente, el que se obligue a la autoridad a que responda sobre el trámite que le dio al ocurso, de ninguna manera mina la facultad exclusiva que el ente gubernamental tiene para decidir el fondo de los hechos;

• Que el silencio de la autoridad, en materia de responsabilidad administrativa, sí viola en perjuicio del denunciante el derecho de petición y la

autoridad queda vinculada para emitir la respuesta por escrito al denunciante; agrega que en términos del artículo 53 Bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, cuando un particular presenta una denuncia, deberá ser citado para que la ratifique, de ahí que ese acto, conlleva una obligación de la autoridad; y,

• Que sí se vulnera el derecho de petición, dado que la ley que rige ese asunto, no solamente lleva aparejada la obligación de que la autoridad emita un acuerdo por escrito, sino que la constriñe a citar al particular como un requisito de procedencia de la queja; por lo que, el silencio de la autoridad transgrede el derecho de petición tutelado en el artículo 8o. constitucional, dado que el hecho de que se trate de cuestiones de responsabilidad no se excluye dada su naturaleza, de la tutela del derecho de petición.

B. Por otra parte, los antecedentes de la resolución emitida por el **Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito**, son los que siguen:

1. El once de julio de dos mil once, **********, **interpuso recurso de queja administrativa** ante el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, contra los supervisores del Ayuntamiento del referido Municipio que irrumpieron en su negocio y realizaron actos ilegales.

2. Atento a lo anterior, el quince de julio de dos mil once, se turnó el recurso de queja administrativa a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, registrándola con el toca 688.

3. La Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, **omitió pronunciarse en relación con el recurso de queja administrativa**.

4. Inconforme, **********, promovió el juicio de nulidad **********, del índice del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, el que por resolución de trece de marzo de dos mil doce, **sobreseyó en el juicio**, al considerar, en la parte que para este asunto interesa, que el actor atribuyó el acto omisivo a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; empero el demandante de nulidad no llamó a juicio a tal autoridad, pese a que se le requirió para que la designara.

5. No estando de acuerdo, **********, promovió demanda de amparo directo, la que se turnó al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el que por auto de cuatro de mayo de dos mil doce, admitió la demanda,

registrándola con el expediente ********** y por sentencia de diecisiete de agosto del citado año, **negó el amparo**.

Los argumentos en los que sustentó la decisión del órgano colegiado precisado, en lo conducente, son los siguientes:

• Que es infundado el argumento del quejoso, en el que adujo que es ilegal el sobreseimiento decretado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, respecto del diverso acto impugnado en el juicio de nulidad, consistente en la omisión de tramitar la queja administrativa interpuesta contra diversos funcionarios públicos (supervisores del Ayuntamiento de Cuernavaca), porque en opinión del demandante de amparo, se violó el derecho de petición tutelado por el artículo 8o. constitucional.

• El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, calificó de infundado el argumento resumido en el párrafo que antecede, porque estimó que de las constancias de autos se advierte, que en la demanda de nulidad se expuso que la queja administrativa se dirigió al presidente municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; empero, la autoridad que en realidad incurrió en la omisión fue la contraloría municipal del citado Ayuntamiento; consecuentemente, a la que se debió demandar fue a esta última y no al primero; de ahí que, el tribunal en cita, indicó que fue correcto el sobreseimiento, siendo que es obligación de la parte actora, designar con exactitud a las autoridades demandadas.

• Que del análisis de la queja administrativa se advierte que, ésta se dirigió al presidente municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, máxime que obra el sello de recibido de esa autoridad; por lo que, si la autoridad a la que se atribuye la omisión es a la contraloría municipal del citado Ayuntamiento, la cual no se le otorgó el carácter de demandada, fue correcto que se decretara el sobreseimiento, siendo que el propio actor fue el que no la designó con esa calidad, sin que el tribunal estuviera obligado a traer a juicio oficiosamente a las autoridades que no fueron señaladas.

• Que contrariamente a lo señalado por el quejoso, en el caso, no se actualiza la violación al derecho de petición tutelado por el numeral 8o. constitucional, ya que el demandante de amparo ejerció el derecho de formular quejas o denuncias en contra de servidores públicos por actos que consideró ilegales, invocando como fundamento el artículo 18, inciso a), fracciones VI, VII, X y XI, del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuerna-

vaca; aunado a que el derecho para interponer quejas está regulado por el numeral 25 del citado bando, el cual confiere la facultad a los habitantes de la ciudad, para inconformarse en contra de las conductas de los funcionarios municipales.

• Empero, por la omisión que indica el quejoso, no se puede considerar transgredido el artículo 8o. constitucional, ya que quien se inconforme contra actos de autoridad, vía queja administrativa, ejerce el derecho conferido al denunciante, que se traduce en la facultad de formular quejas, lo que no implica violación al derecho de petición.

• Que el quejoso tiene el carácter de denunciante por ser el que interpuso el recurso de queja administrativa, pero no tiene interés para reclamar la omisión de continuar con el trámite y resolución de tal queja, es decir, para supervisar la prosecución de la denuncia o queja, ya que su derecho a formularla es contra servidores públicos del Municipio en mención; por lo que, carece de interés jurídico para supervisar el trámite y reclamar la omisión destacada.

• Que el denunciante de una queja administrativa carece de interés jurídico para reclamar la actuación de la autoridad instructora u omisión en que ésta haya incurrido dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa, que considere como una dilación para resolver acerca de la queja, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate.

• Que el orden jurídico otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos, sin concederles la posibilidad de exigir de las autoridades una determinada conducta respecto de sus pretensiones.

• Que en el caso, al haber interpuesto la queja administrativa, mediante la cual hizo del conocimiento de la autoridad municipal, las conductas que estimó ilegales por parte de los funcionarios denunciados, es que se considera que tal facultad para interponer la queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ha quedado satisfecha, pero sin que se encuentre previsto a favor del denunciante, el poder de exigir de la autoridad ante la que se formuló, una determinada conducta respecto de su pretensión.

• Por lo que es intrascendente, la falta de respuesta aludida por el quejoso respecto de la queja administrativa que interpuso, pues, al no asistirle interés jurídico para intervenir en ésta, en nada le afecta el sobreseimiento decretado en el juicio.

Las anteriores consideraciones dieron lugar a la tesis aislada XVIII.4o.4 A (10a.), emitida por el citado órgano colegiado, cuyos datos de localización y texto, se han plasmado en párrafos que anteceden:

"DERECHO DE PETICIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SE TRANSGREDE CUANDO NO SE INFORMA AL PROMOVENTE DEL TRÁMITE DADO A SU QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO."

En esta tesitura, tomando en consideración los requisitos precisados que deben surtir plena vigencia para determinar la existencia de la contradicción de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, se advierte lo siguiente:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones esencialmente iguales

Este requisito se cumple en sus términos, en virtud de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (**********) y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito (**********), examinaron idéntico punto de derecho, en virtud de que analizaron **si la persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente ¿tiene o no, interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo**?

b) Que las diferencias de criterios se presenten en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas expuestas en las sentencias respectivas

También este requisito se actualiza.

En lo que atañe al punto de derecho materia de estudio, el **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito** consideró que: la persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente **tiene**

interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo.

En cambio, el **Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito** determinó que, la persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente, no tiene interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo.

No es óbice para lo anterior, que en un caso, la queja administrativa interpuesta esté regulada por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como en los numerales 52, 53 Bis y 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la referida entidad federativa; y en el otro, la queja administrativa esté normada por el precepto 25 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo que las leyes mencionadas de dichas localidades son coincidentes en establecer que los interesados tienen el derecho de interponer quejas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

De modo que, si los criterios destacados provienen del estudio de similares elementos, en atención a que en el recurso de revisión y en el amparo directo, relacionados con el punto de derecho materia de estudio de los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados en esta denuncia de contradicción de tesis, se analizó si la persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente tiene o no interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo; entonces, se cumple el requisito materia de la contradicción de tesis, siendo necesario fijar el criterio correspondiente.

Por ende, respecto a los asuntos en los que proceda la aplicación de las leyes de las entidades federativas, anteriormente mencionados y legislaciones afines, es necesario establecer si la persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente, tiene o no, interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo.

En esa tesitura, y **aun cuando existen similares elementos** y éstos fueron tomados en cuenta por los órganos colegiados al emitir los fallos res-

pectivos, **resolvieron en sentido diverso**, puesto que uno de ellos consideró que la persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente tiene interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo; en tanto que el otro determinó lo contrario, y arribó a la conclusión de que la persona que denuncia o se queja no cuenta con interés jurídico para esos efectos; consecuentemente, el requisito material de estudio se cumple puntualmente.

Bajo esta perspectiva, al surtir plena vigencia los requisitos mencionados con antelación y, en consecuencia, existir posturas divergentes por parte de los órganos jurisdiccionales de mérito, es dable señalar que el punto concreto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar:

La persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente ¿tiene o no, interés jurídico para impugnar la **omisión** de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo?

QUINTO.—**Precisiones.** Previamente al análisis del punto de derecho a dilucidar, es conveniente destacar una cuestión que se considera fundamental en esta resolución.

En efecto, si bien de los criterios sustentados en las ejecutorias dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, sólo el órgano jurisdiccional mencionado en segundo término, redactó tesis que se publicó conforme a lo previsto en los artículos 218, 219 y 220 de la Ley de Amparo; lo cierto es que tal situación, no constituye obstáculo para estimar que en la especie exista la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que para que dicho supuesto se actualice, basta simplemente que diversos Tribunales Colegiados de Circuito adopten criterios divergentes al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 94/2000, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR

DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."[3]

No es óbice para lo anterior, que en un caso, la queja administrativa interpuesta esté regulada por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la referida entidad federativa; y en otro caso, la queja administrativa esté normada por el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, siendo que las leyes mencionadas de dichas localidades son coincidentes en establecer que los interesados tienen el derecho de interponer quejas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

De igual forma, cabe precisar que no es impedimento para resolver esta contradicción de tesis, el hecho de que un asunto derive de un juicio de amparo en revisión y otro de un amparo directo, puesto que ambos convergen en el punto jurídico motivo de análisis.

SEXTO.—**Estudio.** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio que con carácter de jurisprudencia aquí se define.

---

[3] Consultable en la página 319, Tomo XII, correspondiente a noviembre de dos mil, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, registro digital: 190917.

Como se estableció en el considerando cuarto de esta resolución, la materia de la contradicción de tesis consistirá en dilucidar un punto de derecho respecto del cual, los Tribunales Colegiados de Circuito adoptaron criterios disímiles en sus resoluciones, a saber:

La persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente ¿tiene o no, interés jurídico para impugnar la **omisión** de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo?

A fin de ilustrar la decisión que esta Segunda Sala sustentará al resolver el asunto que nos ocupa, se considera de suma importancia destacar que **la cuestión precisada con antelación no se encuentra relacionada con la postura que se adoptó en el fallo dictado en la contradicción de tesis** **********, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de nueve de diciembre de dos mil cinco y que dio origen a la jurisprudencia **2a./J. 1/2006**, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE."[4]

Lo anterior es así, en virtud que del análisis de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada, se advierte lo siguiente:

1o. Las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados, en esencia, consistieron en:

---

[4] Consultable en la página 1120, Tomo XXIII, correspondiente a enero de dos mil seis, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, registro digital: 176129; cuyo texto es el siguiente:
"De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa."

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.	**Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.**
Consideraciones:	
a) **Las personas sólo tienen derecho a presentar quejas o denuncias** por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, **lo que a su vez conlleva el derecho** de que las unidades administrativas que correspondan, **les reciban la queja o denuncia, se les dé trámite, se les resuelva e informen a los interesados** el resultado de sus investigaciones y gestiones. De lo anterior deriva que **en vía constitucional la quejosa sólo podría reclamar que no se le hubiere dado respuesta** a su queja administrativa, o que no le hayan dado a conocer el resultado de la misma. **b)** No obstante, la quejosa **NO TIENE INTERÉS JURÍDICO**, para promover el juicio de amparo en contra de **la resolución con la que culmina el procedimiento administrativo** que determina que no existen elementos para establecer la responsabilidad administrativa del servidor público y, por tanto, ordena el archivo del expediente.	**a)** **La acción que se ejerció, le otorga derecho al interesado para que pueda presentar quejas y denuncias** por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; **y con ello obviamente a iniciar el procedimiento** disciplinario correspondiente y si bien no se puede obligar a las autoridades ante las que se ventilan ese tipo de instancias, a, necesariamente, resolver positivamente la denuncia, **lo cierto es que estas autoridades sí se encuentran obligadas a emitir una resolución** debidamente fundada y motivada y no únicamente a comunicarles que no procedió su queja. **b)** Asimismo, la parte quejosa **SÍ TIENE INTERÉS JURÍDICO**, en este tipo de asuntos, **cuando concluido el procedimiento disciplinario se determina la responsabilidad** administrativa de algún servidor público, que haya causado daños y perjuicios a los particulares, ya que en virtud de lo anterior éstos pueden tener **el derecho a que se les indemnice la reparación del daño** sufrido.

2o. Lo mencionado con antelación, en la resolución materia de estudio dio lugar a:

• **Que el punto de derecho precisado en el inciso a), NO FUE MATERIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS**, en atención a que, en esen-

cia, **ambos Tribunales Colegiados de Circuito coincidían** en que las personas que formulan una denuncia por incumplimiento de las obligaciones de un servidor público **tenían un derecho jurídicamente tutelado para que a la promoción de mérito se le diera respuesta y ésta, a su vez, se diera a conocer al interesado**.

• Que el punto de derecho precisado en el inciso b), SÍ FUE **MATERIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS**, ya que un Tribunal Colegiado de Circuito consideró que carecían de interés jurídico los particulares que formulaban una queja o denuncia por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, para impugnar la decisión, mediante la cual, se concluye el procedimiento administrativo, independientemente del sentido.

3o. En esta tesitura, en la resolución de la contradicción de tesis **********, el punto de contradicción se fijó en los siguientes términos:

"… es necesario determinar si el denunciante de una queja administrativa tiene o no interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la resolución que ordene el archivo del expediente, al considerar la autoridad encargada de imponer las sanciones, que no procede la queja o que no existen elementos para determinar la responsabilidad del servidor público."

4o. Así, una vez analizado el punto jurídico que antecede, esta Segunda Sala sustentó el criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro y texto siguientes:

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.—De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la re-

solución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa."[5]

En estos términos, en la contradicción de tesis **********, se analizó **si el denunciante** de una queja administrativa **tenía o no interés jurídico** para promover juicio de amparo indirecto, en contra de **LA RESOLUCIÓN CON LA QUE CULMINA EL PROCEDIMIENTO y no se resuelve favorablemente su pretensión**.

Así, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que, si bien, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos otorga al particular la facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; lo cierto es que, dicha prerrogativa, no llega al extremo de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, en virtud de que el régimen de responsabilidades no tiene como propósito salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público; por tanto, se determinó que el denunciante de la queja carecía de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución (con la que culmina el procedimiento), que ordena el archivo del expediente por ser improcedente aquella promoción o por no existir elementos para fincar responsabilidad.

Bajo esta perspectiva, es evidente que **el punto jurídico que se analiza en esta contradicción** (la persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente ¿tiene o no, interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo?), **no se ha examinado** por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **puesto que en la especie EXISTE UNA OMISIÓN DE EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A UNA PROMOCIÓN, en tanto que en la contradicción de tesis** **********, la materia de estudio tuvo un enfoque diverso, ya que en ésta **sí existía una respuesta o resultado en el procedimiento administrativo** de responsabilidades de los servidores públicos.

Además, cabe precisar que la materia de esta contradicción tampoco está relacionada con la postura que se adoptó por esta Segunda Sala al fallar

[5] Novena Época. Registro digital: 176129. Instancia: Segunda Sala. Tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, enero de 2006, materia administrativa, tesis 2a./J. 1/2006, página 1120.

la contradicción de tesis **********, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en sesión de tres de septiembre de dos mil ocho y que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 124/2008, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN.";[6] lo anterior es así, ya que en esa se analizó la resolución con la que culmina el procedimiento administrativo, y si en ese supuesto el particular puede ofrecer más pruebas, no como ocurre en este caso, que es el primer escrito que se presenta y lo que se reclama, es la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al ocurso respectivo.

En consecuencia, sí procede resolver el punto de contradicción de criterios que se ha indicado al inicio de este considerando.

Tomando en cuenta que la materia de la contradicción de tesis que nos ocupa, está relacionada con el **interés jurídico**, a continuación se cita el siguiente criterio relevante de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la existencia de un agravio personal y directo, cuyos rubro y texto, son los siguientes:

"INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN.—El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la men-

[6] Consultable en la página 259, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXVIII, de septiembre de dos mil ocho, registro digital: 168796.

cionada obligación se impute a cualquier órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta tenga la capacidad, otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, cuando no haya un 'poder de exigencia imperativa'; tampoco existe un derecho subjetivo ni por consiguiente interés jurídico, cuando el gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección puede hacer valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la situación legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situación concreta, que sea contraria a la primera, desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan 'el poder de exigencia' correspondiente."[7]

De conformidad con lo anterior, este Alto Tribunal ha señalado que el **interés jurídico** precisa de la **afectación a un derecho subjetivo**, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia que establece la norma objetiva del derecho, lo cual implica, la conjunción de dos elementos concurrentes:

a) una facultad de exigir; y,

[7] Tesis 104, consultable en la página 81, *Apéndice* 2000, Tomo VI, común, Séptima Época, Pleno, registro digital: 918267.

b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.

En este contexto, procede analizar si la persona que denuncia o se queja del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ante la autoridad competente ¿tiene o no, interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de pronunciarse y notificar el acuerdo que recaiga al escrito respectivo?

El tópico que antecede se encuentra relacionado con el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, dado que involucra a una persona que ha presentado una denuncia o una queja en contra de algún servidor público.

Las bases del régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se prevén en los artículos 108, párrafos primero y último, así como 109, fracción III, párrafo primero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, los cuales deben regir el desempeño de su encargo, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa por los actos u omisiones que constituyan irregularidades en el desarrollo de sus funciones.

Esto con independencia de los demás procedimientos que se llegaran a originar, ya que el apego a los principios que se han destacado con antelación, constituye una cuestión de orden público y de interés general, en virtud de que la sociedad está interesada en que los servidores públicos desempeñen su trabajo conforme a derecho.

En este tenor, el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, tiene como finalidad, lograr y preservar una prestación óptima del servicio público, lo que obedece a intereses superiores de carácter público e implica que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; además, la investigación relativa no se lleva a cabo con el propósito indefectible de sancionar al servidor público, sino con el fin de determinar con exactitud si cumplió o no, con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste es compatible o no, con el servicio que presta.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXXVII/2002, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.—Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta."[8]

Al respecto, cabe señalar que el artículo 109, párrafo primero, de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo ese carácter, incurran en responsabilidad.

En debida observancia al precepto constitucional que antecede, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la referida entidad federativa (recurso de revisión **********), así como el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos (amparo directo **********), se estableció a favor de determinadas personas la posibilidad de presentar quejas o denuncias, por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, ante la autoridad competente; los numerales que prevén esa prerrogativa, son del tenor siguiente:

---

[8] Consultable en la página 473, Tomo XVI, correspondiente a octubre de dos mil dos, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época. registro digital: 185655.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.	
"Artículo 37. A la Secretaría de la Contraloría, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: […] XLIX. Recibir y atender directamente, o a través de las Delegaciones de la Secretaría o de los órganos de control, las quejas o denuncias que presenten los particulares en contra de los servidores públicos por incumplimiento en sus obligaciones o con motivo de acuerdos, convenios o contratos que celebren con las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las normas establecidas para tal efecto; […]"	

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.	Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.
"Artículo 52. La Secretaría, los Ayuntamientos y los Órganos que determinen las leyes, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán unidades específicas que dependerán del órgano de control correspondiente, a las que el público tenga fácil acceso para presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los Servidores Públicos que establece la presente Ley, con las que se	"Artículo 25. Los habitantes podrán exponer al Presidente Municipal, en forma verbal o escrita, cualquier queja, sugerencia o informe respecto a las Obras o Servicios Municipales, la actuación de los Servidores Públicos Municipales o cualquier otro asunto Administrativo. Igual derecho les compete respecto a las autoridades auxiliares en sus respectivas jurisdicciones."

iniciará en su caso el procedimiento correspondiente."	
"Artículo 53. La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las denuncias del público sean atendidas y resueltas con eficiencia, salvo las relativas a las quejas contra servidores municipales, que serán dictadas por los Ayuntamientos respectivos."	**"Artículo 27. La Contraloría del H. Ayuntamiento atenderá y canalizará las quejas o señalamientos que por acciones u omisiones de los Servidores Públicos Municipales presenten por escrito o por comparecencia los habitantes del Municipio; las que se turnarán al Servidor Público que corresponda; y les dará seguimiento para su pronta resolución. De lo anterior informará al Cabildo cuando así se le requiera."**
"Artículo 53 Bis. La Secretaría, los Ayuntamientos y los Órganos de Control que determinen las Leyes al conocer, investigar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 50 de esta Ley, iniciarán el trámite de la queja o denuncia bajo las disposiciones siguientes: **I. Las quejas o denuncias deberán presentarse por comparecencia directa o por escrito; en este último caso el promovente deberá ser citado para que ratifique su promoción, en caso de que no sea ratificado se archivará el expediente correspondiente; lo anterior sin perjuicio de que la autoridad competente pueda darle seguimiento de oficio al asunto respectivo;** **II. La Autoridad practicará todas las diligencias que estime nece-**	

sarias a fin de contar con los elementos suficientes para la mejor substanciación del asunto que se investiga; III. Si la autoridad competente, después de valoradas las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades en contra del Servidor Público, archivará el expediente respectivo, lo que hará del conocimiento del promovente, para que en su caso, éste aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo; IV. Si se cuenta con elementos que hagan probable responsabilidad del Servidor Público, se iniciará el procedimiento que establece el artículo 68 de esta Ley, sin perjuicio de lo que establecen las fracciones anteriores."	
"Artículo 54. La Secretaría, los Ayuntamientos, así como todos los Servidores Públicos, tienen obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las que se refieren los artículos anteriores, y evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso."	
"Artículo 68. La autoridad competente para imponer las sancio-	

nes administrativas, se sujetarán al siguiente procedimiento: **I. Citará al probable responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo el desahogo de la misma, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en dicha audiencia lo que a sus intereses convenga, por sí o por medio de un defensor.** **(…)** **II. Desahogada la audiencia señalada en la fracción anterior, la autoridad resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes si existe o no responsabilidad, imponiendo, en su caso, al infractor, las sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución al servidor público y, en su caso, al Superior Jerárquico dentro de los treinta días hábiles siguientes;** **III. Si en la audiencia, encontrare que no cuenta con elementos suficientes para resolver, (…) podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias.** **IV. En cualquier momento, (…) podrá determinar la suspensión provisional del probable responsable de su empleo, cargo o comisión, […]**	

Si el Servidor Público suspendido provisionalmente, no resultare responsable de la falta o faltas que se le imputen, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debió percibir durante el tiempo en que estuvo suspendido."	

De lo precedente se observa, que los preceptos jurídicos establecen en similares términos, entre otras cuestiones, que los habitantes de la entidad federativa (Puebla o Morelos) tienen el derecho de presentar quejas o denuncias, por escrito o por comparecencia, por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, a los cuales deberá recaer una contestación (previó trámite que corresponda –de ser el caso–).

Entonces, la previsión de ese derecho, a favor de la persona de que se trate, implica por una parte la facultad de presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y, por otra, en vía de correspondencia, la obligación de que se dé respuesta a la promoción o comparecencia respectivas; por tanto, **en caso de que alguno de los dos supuestos anteriores se vulneren**, es indudable que **quien se encuentre en esa circunstancia, tiene interés jurídico para impugnar, ya sea porque se le impidió formular una queja o denuncia, o bien, porque no se le dio contestación a ésta**.

Se afirma lo anterior, en virtud de que si el particular está facultado para presentar denuncias o quejas, ello le genera a su vez el derecho subjetivo de que la autoridad ante la que presentó aquélla, le informe lo que aconteció al respecto, sin que ello signifique, de ninguna manera, una transgresión a la facultad exclusiva punitiva con la que cuenta el Estado en materia de responsabilidades, sino que sólo se acata lo establecido en el artículo 16 constitucional, esto es, que el derecho a interponer denuncias o quejas administrativas, implica que la autoridad correspondiente, provea lo conducente respecto a ese ocurso y lo notifique al interesado.

En efecto, el derecho subjetivo con que cuenta el gobernado, es el relativo a formular quejas y denuncias en contra de servidores públicos por incumplimiento de sus obligaciones, cuya potestad de exigencia nace a partir de que todos los funcionarios están constreñidos a respetar y hacer respetar esa prerrogativa; en consecuencia, el derecho a interponer la denuncia o la

queja no tendría sentido, si la autoridad encargada de conocer los hechos no informa al promovente, el destino que le dio a su ocurso o el acuerdo que recayó a su comparecencia; en síntesis, la facultad de informar a la autoridad competente de hechos que probablemente constituyan alguna responsabilidad administrativa, lleva aparejado el derecho de dar a conocer al interesado lo que al respecto se determine por la autoridad, de manera congruente (sin que ello implique soslayar los presupuestos procesales para la admisión de la denuncia o la queja, ni mucho menos a constreñir a la autoridad competente a ejercer sus facultades de investigación y sanción).

De acuerdo a lo expuesto, no se está ante una mera facultad o potestad, sino ante un derecho subjetivo, el cual debe ser tutelado con la intensidad que su naturaleza lo permite, esto es, la protección constitucional y legal de la facultad de denunciar, no termina con el hecho de que se permita al particular presentar su escrito, sino se debe hacer extensiva a que la autoridad quede obligada a dar una respuesta al interesado de manera congruente y que ésta la haga de su conocimiento (se reitera, no existe disposición constitucional o legal que vincule a la autoridad a emitir un pronunciamiento en un sentido específico).

Esto es así, en razón de que los derechos se deben entender y abordar desde una óptica protectora y tutelarse para que éstos en realidad sean efectivos, por lo que, en el caso la efectividad del derecho a denunciar se verifica una vez que la autoridad ante quien se interpuso la queja se pronuncie sobre el trámite que dará al ocurso o comparecencia, porque en ese caso, se materializa la voluntad de la autoridad y con ello queda satisfecha la pretensión de la parte quejosa.

De no tomarse en cuenta lo anterior, estaríamos ante el supuesto de una mera prerrogativa o potestad sin exigencia imperativa, dado que si el denunciante hace del conocimiento de la autoridad hechos probablemente constitutivos de responsabilidad; entonces, tiene la facultad de exigir al ente gubernamental que se pronuncie, ya que de otro modo ese derecho no sería efectivo ni tendría sentido, puesto que es de explorado derecho que toda promoción debe ser acordada por la autoridad.

Estimar lo contrario, implicaría dejar a voluntad de la autoridad competente la decisión de tramitar o no las denuncias o quejas que presentan las personas en contra del incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos, lo que abriría la posibilidad a una actuación arbitraria de la autoridad competente, basada en el argumento de que su derecho quedó colmado al formular la queja.

En conclusión, el derecho de presentar quejas o denuncias administrativas, trae aparejado el correlativo a que la autoridad correspondiente emita un pronunciamiento, de manera congruente, y lo haga del conocimiento de la persona que ejerció ese derecho, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las formalidades del procedimiento que se deben observar para este tipo de asuntos; de ahí que la persona que denuncia o formula la queja administrativa sí tiene interés jurídico para impugnar la omisión en que incurrió la autoridad con motivo de la presentación de la denuncia o del recurso de queja.

No es óbice a lo que antecede, que el denunciante carezca de interés jurídico para promover el juicio de amparo cuando se impugna la decisión final del procedimiento administrativo de responsabilidad (jurisprudencia 2a./J. 1/2006 y que se mencionó al inicio del presente considerando); puesto que como se ha demostrado, nos encontramos ante un caso distinto y que consiste en la omisión del ente gubernamental de dar a conocer al interesado lo que al respecto se determine, en relación con el cual se considera que la persona que se encuentra en esa hipótesis normativa sí tiene interés jurídico para impugnarlo.

SÉPTIMO.—**Criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.** Por lo anterior, la tesis que debe prevalecer es la sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley de Amparo, debe regir con carácter de jurisprudencia, quedando redactada con los siguientes rubro y texto:

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, establecen a favor de los particulares el derecho subjetivo de presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, el cual no puede agotarse con la recepción de aquéllas, sino que se debe conceder a los interesados la posibilidad de exigir de la autoridad la emisión de un pronunciamiento que recaiga al escrito o comparecencia relativo, es decir, la circunstancia de que debe recaer un pronunciamiento de la autoridad competente, que lo haga del conocimiento del particular, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una obligación correlativa al derecho de presentar la queja o de-

nuncia, lo que significa que el interesado tiene interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de emitir un pronunciamiento, ya que el citado derecho subjetivo trae aparejado el correlativo a que ésta emita un proveído apegado a las formalidades del procedimiento que deben observarse para ese tipo de asuntos y lo haga del conocimiento de quien las formuló; sin que ello implique que la autoridad deba resolver en determinado sentido.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis que se denuncia.

SEGUNDO.—Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del último considerado de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, dése la publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos emitió su voto en contra.

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUG-

NAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, establecen a favor de los particulares el derecho subjetivo de presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, el cual no puede agotarse con la recepción de aquéllas, sino que se debe conceder a los interesados la posibilidad de exigir de la autoridad la emisión de un pronunciamiento que recaiga al escrito o comparecencia relativo, es decir, la circunstancia de que debe recaer un pronunciamiento de la autoridad competente, que lo haga del conocimiento del particular, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una obligación correlativa al derecho de presentar la queja o denuncia, lo que significa que el interesado tiene interés jurídico para impugnar la omisión de la autoridad de emitir un pronunciamiento, ya que el citado derecho subjetivo trae aparejado el correlativo a que ésta emita un proveído apegado a las formalidades del procedimiento que deben observarse para ese tipo de asuntos y lo haga del conocimiento de quien las formuló; sin que ello implique que la autoridad deba resolver en determinado sentido.

2a./J. 25/2015 (10a.)

Contradicción de tesis 301/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Cuarto del Décimo Octavo Circuito. 25 de febrero de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Tesis y/o criterios contendientes:

Tesis XVIII.4o.4 A (10a.), de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO SE TRANSGREDE CUANDO NO SE INFORMA AL PROMOVENTE DEL TRÁMITE DADO A SU QUEJA ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO."; aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013, página 2109, y el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 117/2014.

Tesis de jurisprudencia 25/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión del once de marzo de dos mil quince.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Subsección 4.
SENTENCIAS QUE ABANDONAN JURISPRUDENCIA

CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).

CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 4 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA. Véase página 643.

Nota: La Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 94/2014, determinó abandonar los criterios sostenidos en las diversas tesis de jurisprudencia 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 y 2a./J. 1/2010, de rubros: "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. LA ACCIÓN PARA COMBATIR SU RECONOCIMIENTO EN UN CONVENIO CELEBRADO POR LAS PARTES Y SANCIONADO POR LA JUNTA CORRESPONDIENTE, ESTÁ SUJETA AL PLAZO PRESCRIPTIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", "CONVENIO LABORAL. LA NULIDAD DEL CELEBRADO ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA DAR POR CONCLUIDO UN CONFLICTO, DEBE DEMANDARSE EN UN NUEVO JUICIO.", "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE." y "TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EL OPERARIO PUEDE

SOLICITAR LA NULIDAD DEL CONVENIO SUSCRITO POR CONCEPTO DE FINIQUITO O LIQUIDACIÓN, SI CONSIDERA QUE EXISTE RENUNCIA DE DERECHOS.", publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 134, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 197, Tomo XXIX, enero de 2009, página 608 y Tomo XXXI, enero de 2010, página 316, respectivamente.

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUTORIAS Y TESIS
QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA

Subsección 1.
TESIS AISLADAS Y, EN SU CASO, EJECUTORIAS

AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA [ABANDONO DE LAS TESIS 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) Y 2a. LXXVI/2014 (10a.) (*)]. Si se parte de la concepción de "resolución favorable" que para efectos del dispositivo citado ha establecido esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende que se condicione la procedencia del juicio de amparo directo a que la autoridad demandada interponga el recurso de revisión contencioso administrativo y éste sea admitido, ya que si a través de esa resolución favorable se ha resuelto de manera absoluta la pretensión de la parte actora, quien ha obtenido el máximo beneficio, impidiendo que la autoridad emita un nuevo acto con idéntico sentido de afectación que el declarado nulo, la promoción del amparo tendría como único objeto permitir, en caso de que la situación producida por la sentencia favorable se vea afectada al estimarse procedente y fundado dicho recurso, que pueda examinarse en el amparo la constitucionalidad de

---

Nota: (*) Esta tesis abandona los criterios sostenidos por la propia Sala, en las diversas 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) y 2a. LXXVI/2014 (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL IMPEDIR INJUSTIFICADAMENTE PLANTEAR EN DICHO JUICIO PROMOVIDO CONTRA SENTENCIAS FAVORABLES PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO AL RESOLVER LA REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN.", "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL LIMITAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO A DICHO JUICIO CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA." y "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PRODUCIR INCERTIDUMBRE JURÍDICA.", publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en la *Gaceta* del *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, páginas 397, 398 y 400, respectivamente.

las normas aplicadas en tanto de ello podría derivarse el beneficio relativo a su inaplicación, impidiéndose, además, la promoción excesiva de juicios de amparo. En este sentido, la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo respeta el derecho de acceso a la justicia reconocido en el segundo párrafo del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de actualizarse el supuesto de sentencia favorable el particular, que en principio no veía afectado su interés jurídico, podrá promover el juicio de amparo directo con la limitación relativa a los conceptos de violación que pueden plantearse y sujetándose a las condiciones previstas respecto de la revisión fiscal, que se explican en las razones apuntadas, pero en todo caso que se considere no actualizado ese supuesto, tiene el derecho de promover el juicio de amparo en términos de la fracción I del artículo 170 mencionado, en el que podrá hacer valer tanto cuestiones de legalidad, como de constitucionalidad de las normas generales aplicadas, lo que demuestra que la acción de amparo en ningún caso le está vedada, salvo que con su promoción ya no pueda obtener ningún beneficio. Las razones apuntadas llevan a abandonar los criterios contenidos en las tesis 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) y 2a. LXXVI/2014 (10a.).

2a. XXII/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 5334/2014. Comercializadora Ragón, S.A. de C.V. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Formularon salvedades José Fernando Franco González Salas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. Las normas indicadas no violan el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando no prevén el plazo máximo de duración de los procedimientos de verificación de origen, específicamente por lo que hace a los cuestionarios de verificación y el lapso con que cuenta la autoridad aduanera para emitir la

resolución con la que concluye el procedimiento, lo cierto es que tal previsión está contenida en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, que dispone que el plazo para verificar si un bien califica como originario es de 2 años, y que la consecuencia de no levantar el acta final de visita, no notificar el oficio de observaciones o, en su caso, no terminar la revisión dentro de ese término, deja sin efectos la orden y las actuaciones que derivaron durante dicha visita o revisión. Es decir, el sentido jurídico que deriva del artículo 46-A es el de fijar un plazo límite a la autoridad fiscal para concluir las visitas o revisiones a los contribuyentes, incluso cuando esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México; por tanto, si el procedimiento de verificación previsto en el artículo 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene como finalidad que las autoridades verifiquen si un bien importado al territorio de alguna de las partes califica como originario, válidamente puede aplicarse el plazo de 2 años tanto al contribuyente importador, como al tercero relacionado con éste, como lo es el exportador o productor que emite el certificado de origen, con apoyo en el cual se introdujo la mercancía al territorio nacional.

2a. XVI/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 5596/2014. Knitro. 11 de marzo de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO O AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNE TOTAL O PARCIALMENTE UN RÉGIMEN FISCAL OPTATIVO, CUYA IMPLEMENTACIÓN OBEDECE A FINES EXTRAFISCALES. Si el contribuyente optó por la aplicación de un régimen fiscal alternativo (diverso del régimen general), cuya justificación obedece a cuestiones extrafiscales encaminadas a otorgarle un beneficio nominal o un incentivo, sin obligación alguna para ello y únicamente teniendo como factor determinante de la elección su voluntad, deben calificarse como inoperantes los conceptos de violación o los agravios hechos valer en la demanda de amparo o en el recurso de revisión, respectivamente, en los que se alegue que los preceptos que lo prevén transgreden los principios tributarios de proporcionalidad, equidad y legalidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque en primer lugar al estar en plena libertad de no sujetarse a las normas

que lo regulan, fue su decisión hacerlo de esa manera y en segundo, porque la implementación de ese mecanismo optativo tiene como sustento razones extrafiscales (económicas o administrativas) y, por tanto, diversas a los principios constitucionales mencionados; en tal virtud, se trata de un sistema cuya existencia, dimensión, estructura, elementos, contenido y alcance deben ser fijados por el legislador, el cual cuenta con libertad de configuración para diseñarlo y, específicamente, para determinar los estímulos particulares otorgados en aquél. En ese sentido, la calificación de inoperancia debe extenderse a una diversidad de planteamientos en los que se impugne el régimen optativo en general o alguna de las porciones que lo integran, ya que constituye una unidad normativa cuyos componentes no puede analizarlos el órgano jurisdiccional de manera aislada e independiente del sistema al cual pertenecen, porque ello implicaría variar los términos en los que fue concebido por el legislador e inclusive atentar contra las finalidades particulares perseguidas por aquél en materia de su competencia.

2a. XIII/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 4638/2014. Brightstar de México, S.A. de C.V. 4 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ANÁLISIS QUE DEBEN REALIZAR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. De un ejercicio interpretativo de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, deriva la obligación de los Tribunales Colegiados de Circuito de realizar un acucioso examen comparativo entre las pretensiones deducidas en el juicio contencioso y el resultado del análisis de los conceptos de anulación, ya que es este ejercicio de contraste, propio del análisis de fondo y no del auto inicial del juicio, por la dificultad que encierra y que deberá hacerse en cada asunto concreto, lo que permitirá conocer si se ha obtenido una sentencia favorable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos del dispositivo legal citado.

2a. XXIII/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 5334/2014. Comercializadora Ragón, S.A. de C.V. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta

tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Formularon salvedades José Fernando Franco González Salas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU CONCEPTO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia citada sostuvo que el alcance del concepto "resolución favorable" en el contexto del dispositivo referido involucra la presencia de un fallo que declare la nulidad por cualquier causa y efecto, sin que para su actualización deba verificarse en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a apartarse de ese criterio para sostener que el concepto de "resolución favorable", en la lógica del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, supone el dictado de una sentencia que resuelva de manera absoluta la pretensión de la parte actora y que le proyecta el máximo beneficio sin posibilidad de una afectación posterior, con independencia del tipo de nulidad declarada; es, en otras palabras, aquella sentencia que implica que el acto impugnado sea irrepetible al proscribir circunstancia alguna que provoque que la autoridad pueda emitir un nuevo acto en el mismo sentido que el declarado nulo, en tanto que el vicio que dio lugar a tal declaratoria no puede ser subsanado.

2a. XXI/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 5334/2014. Comercializadora Ragón, S.A. de C.V. 25 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; mayoría de cuatro votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Formularon salvedades José Fernando Franco González Salas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Nota: (*) Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y en virtud de que abandona el criterio sostenido por la propia Sala, en la diversa 2a./J. 90/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas y en la *Gaceta* del *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 768, esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se llega a la convicción de que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores, así como en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte resolución administrativa en la que determine su responsabilidad y destitución del cargo. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, momento en el cual, al haber sido desvinculado de la institución, puede buscar otra fuente de ingresos.

2a. XVIII/2015 (10a.)

Amparo en revisión 652/2014. J. Jesús Escobar Celis. 28 de enero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Marga-

rita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la Secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de las investigaciones y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública, de ahí que en términos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible determinar que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican la suspensión de labores son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho el servidor público derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle.

2a. XVII/2015 (10a.)

Amparo en revisión 652/2014. J. Jesús Escobar Celis. 28 de enero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedad Margarita Beatriz

Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES SOSTENIDAS EN JUICIOS DE AMPARO RESUELTOS PREVIAMENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE RECONOCIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CUYA INVALIDEZ IMPUGNA EL RECURRENTE HASTA EL ESCRITO DE REVISIÓN, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO. Cuando el quejoso en su demanda controvirtió la incorrecta aplicación de una determinada norma y adujo violación a los derechos fundamentales de debida fundamentación y motivación, y el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, para esclarecer la correcta aplicación del precepto referido, transcribe las consideraciones sostenidas en juicios de amparo que resolvió previamente, en los cuales reconoció su constitucionalidad, como es hasta el escrito de revisión cuando el recurrente atribuye vicios de inconstitucionalidad a la norma en cuestión, bajo el argumento de que el órgano colegiado de amparo indebidamente estudió su constitucionalidad, es evidente que se trata de argumentos que en vía de agravio no constituyen un verdadero planteamiento de constitucionalidad relevante para efectos de la configuración de los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso de revisión, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la mera aplicación de precedentes o la transcripción de consideraciones en la sentencia de amparo recurrida no implica fijar el alcance de la norma indebidamente interpretada o aplicada o, en su defecto, que se haya desentrañado su sentido en relación con el texto constitucional. De esta manera, los agravios en los cuales el recurrente pretende atribuir vicios de inconstitucionalidad al precepto legal cuya supuesta interpretación constitucional llevó a cabo el Tribunal Colegiado de Circuito deben estimarse ineficaces, por constituir cuestiones novedosas no susceptibles de análisis en el recurso de revisión.

2a. XIX/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 5650/2014. Belmar Alexei Díaz González. 25 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI AL EJERCER SU COMPETENCIA DELEGADA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DESESTIMAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO O LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL, TAL DECISIÓN NO VINCULA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Como consecuencia de los diversos acuerdos generales para delegar en los Tribunales Colegiados de Circuito, entre otras, la facultad para analizar las causas de improcedencia de los juicios de amparo indirecto en revisión de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos órganos jurisdiccionales deben limitarse a depurar las cuestiones de improcedencia y, en su caso, remitir el asunto a este Alto Tribunal para la resolución de fondo procedente; supuesto en el cual, en principio, debe respetarse lo resuelto por aquéllos, porque en los aspectos de procedencia se erigen como órganos terminales de decisión. No obstante, cuando las razones ofrecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito para desestimar las cuestiones de improcedencia involucren pronunciamientos sobre el fondo del asunto, no hay obstáculo para estudiar de nueva cuenta la procedencia del juicio, particularmente los razonamientos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues tales órganos no deben fijar criterios que rebasen la competencia delegada que les fue conferida, ni vincular al Máximo Tribunal a estudiar los conceptos de violación, con base en una sentencia previa que implícita o explícitamente dispuso respecto de la concesión del amparo o los efectos que a ésta deben darse.

2a. XXIV/2015 (10a.)

Amparo en revisión 933/2014. Diana Aquino Gutiérrez. 18 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS. Conforme a las fracciones I y X del artículo 10 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, los servidores públicos de carrera gozan de estabilidad y permanen-

cia en el empleo, y tienen derecho a recibir una indemnización en los términos de ley en caso de despido injustificado, lo que implica que el legislador federal decidió hacer extensiva a esa clase de servidores públicos, los cuales están conceptualizados como trabajadores de confianza en términos de la fracción IX del artículo 3o. del ordenamiento citado, una protección en materia de trabajo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado B, fracción XIV, no les reconoce. Ahora bien, la indemnización prevista en la fracción X de referencia no comprende el pago de salarios caídos, toda vez que el principio de estabilidad y permanencia en el empleo debe interpretarse en términos restrictivos, es decir, únicamente dentro del marco de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ya que una concepción contraria, conduciría a otorgar a sus integrantes una protección que el legislador secundario no tuvo la intención de conferirles; de ahí que si la legislación aludida no establece, bajo ningún supuesto, el derecho de los servidores públicos de carrera a recibir el pago de los salarios caídos, debe entenderse que el creador de la norma no quiso beneficiarlos con tal protección, sin que les resulten aplicables las prestaciones contempladas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en virtud de que su artículo 8o. excluye de su observancia a los servidores públicos de confianza.

2a. XV/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 5023/2014. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 4 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los artículos 3, fracción IX, y 10, fracción X, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se advierte que los servidores públicos de carrera desempeñan un cargo de confianza en alguna dependencia y tienen derecho a recibir una indemnización en términos de ley en caso de despido injustificado; no obstante, el ordenamiento legal

indicado es omiso en precisar los conceptos que la integran y las bases sobre las cuales deberá calcularse. Ahora bien, el artículo 123, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los trabajadores a recibir una indemnización en caso de despido injustificado; sin embargo, sólo la fracción XXII del propio apartado A señala que deberá integrarse a razón de 3 meses de salario. En consecuencia, si en los ordenamientos constitucional y legal referidos el derecho a la indemnización persigue la misma finalidad, consistente en proveer al trabajador que sea despedido injustificadamente de los medios necesarios para su subsistencia y la de quienes de él dependen, en tanto logra reincorporarse a una nueva fuente de empleo, resulta válido establecer, por identidad de razón, que la indemnización prevista en la fracción X del artículo 10 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal comprende el pago de 3 meses de sueldo.

2a. XIV/2015 (10a.)

Amparo directo en revisión 5023/2014. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 4 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Juan N. Silva Meza. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Subsección 2.
EJECUTORIAS DICTADAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, EN SU CASO, LAS TESIS RESPECTIVAS

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DEL MISMO ORDENAMIENTO.

PARTICIPACIONES FEDERALES Y FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. EL DESCUENTO REALIZADO POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS AL AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO EN JUNIO DE 2014 POR AQUELLOS CONCEPTOS, PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL ADELANTO DE RECURSOS RECIBIDOS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES Y DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2014. MUNICIPIO DE JANTETELCO, ESTADO DE MORELOS. 18 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de febrero de dos mil quince.

VISTOS; Y,
RESULTANDO:

PRIMERO.—**Demanda.** Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nicolás Flores López, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Jantetelco, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de dicho Estado, por los actos que a continuación se señalan:

1) La invalidez de las órdenes e instrucciones giradas por el Poder Ejecutivo, a efecto de retener al Municipio actor sus participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal.

2) La retención ilegal de las participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, efectuadas por el Poder Ejecutivo y su correspondiente entrega al Municipio actor, con los intereses que correspondan.

SEGUNDO.—**Antecedentes.** Como antecedentes de los actos, cuya invalidez se reclama, el Municipio actor narró los siguientes:

"1o. El suscrito resultó electo con el carácter de síndico municipal de Jantetelco, Morelos, con motivo de la renovación de las autoridades municipales, iniciando mi gestión el día 1o. de enero de 2013, lo cual se acredita mediante la constancia de mayoría expedida por el Instituto Estatal Electoral de Morelos, la cual se adjunta en copia certificada.

"2o. Con fecha 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad', órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2014. Gaceta que, incluso, puede ser visualizada en la página de Internet con dirección: *http://periodico.morelos.gob.mx/periódicos/2013/5150_SUMARIO.pdf*, la que pido se tome en cuenta al momento de resolver y cuyo ejemplar, además, se anexa al presente escrito en original.

"3o. Conforme a dicho calendario, con fecha 13 de marzo del año en curso, la Tesorería Municipal de Jantetelco, Morelos, entrega al Ejecutivo del Estado la factura electrónica número T-16, por la cantidad de $1'375,378.00 (un millón trescientos setenta y cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto del anticipo de participaciones correspondientes al mes de marzo del presente año, con el desglose siguiente:

Concepto	Importe
Fondo General de Participaciones	$940,737.00
Fondo de Fomento Municipal	$358,461.00
Impuesto especial sobre producción	$30,259.00
Tenencia vehicular	$2,250.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	$13,671.00
Total	$1'375,378.00

"5o. Con fecha 4 de marzo del año en curso, el Gobierno del Estado de Morelos efectuó a la cuenta bancaria del Municipio actor, el depósito de las participaciones federales (anticipo), correspondiente a las participaciones correspondientes al mes de marzo del presente por la cantidad de $1'178,155.77, en lugar de la cantidad de $1'375,378.00, que correspondían al Municipio actor, por concepto de anticipo de participaciones.

"Es decir, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, retuvo al Municipio actor, indebidamente, la cantidad de $197,222.23.

"El depósito efectuado a favor del Municipio no cubre siquiera el importe del Fondo de Fomento Municipal, el que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde el 100% al Municipio.

"6o. Conforme a dicho calendario, con fecha 15 de abril del año en curso, la Tesorería Municipal de Jantetelco, Morelos, entregó al Ejecutivo del Estado la factura electrónica T-32, por la cantidad de $1'249,667.00 (un millón doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), por concepto del anticipo de participaciones correspondientes al mes de abril del presente año, con el desglose siguiente:

Concepto	Importe
Fondo General de Participaciones	$883,393.00
Fondo de Fomento Municipal	$333,724.00
Impuesto especial sobre producción	$15,717.00
Tenencia vehicular	$1,400.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	$15,433.00
Total	$1'249,667.00

"7o. Con fecha 15 de abril del año en curso, el Gobierno del Estado de Morelos efectuó a la cuenta bancaria del Municipio actor, el depósito de las participaciones federales (anticipo), correspondiente a las participaciones correspondientes al mes de abril del presente por la cantidad de $1'053,833.66, en lugar de la cantidad de $1'249,667.00, que correspondían al Municipio actor, por concepto de anticipo de participaciones.

"Es decir, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, retuvo al Municipio actor indebidamente, la cantidad de $195,833.34.

"El depósito efectuado a favor del Municipio no cubre siquiera el importe del Fondo de Fomento Municipal, el que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde el 100% al Municipio.

"8o. Conforme a dicho calendario, con fecha 16 de mayo del año en curso, la Tesorería Municipal de Jantetelco, Morelos, entregó al Ejecutivo del Estado el recibo de pago No. T-46, por la cantidad de $1'240,545.00 (un millón doscientos cuarenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto del anticipo de participaciones correspondientes al mes de mayo del presente año, con el desglose siguiente:

Concepto	Importe
Fondo General de Participaciones	$878,971.00
Fondo de Fomento Municipal	$332,502.00
Impuesto especial sobre producción	$16,705.00
Tenencia vehicular	$1,144.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	$11,223.00
Total	$1'240,545.00

"9o. Con fecha 14 de mayo del año en curso, el Gobierno del Estado de Morelos efectuó a la cuenta bancaria del Municipio actor, el depósito de las participaciones federales (anticipo), correspondiente a las participaciones correspondientes al mes de mayo del presente por la cantidad de $1'046,100.55, en lugar de la cantidad de $1'240,545.00, que correspondían al Municipio actor, por concepto de anticipo de participaciones.

"Es decir, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, retuvo al Municipio actor indebidamente, la cantidad de $194,444.45.

"El depósito efectuado a favor del Municipio no cubre siquiera el importe del Fondo de Fomento Municipal, el que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde el 100% al Municipio.

"10o. Conforme a dicho calendario, con fecha 12 de junio del año en curso, la Tesorería Municipal de Jantetelco, Morelos, entregó al Ejecutivo del Estado la factura electrónica No. N 221, por la cantidad de $1'273,618.00 (un millón doscientos setenta y tres mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), por concepto del anticipo de participaciones correspondientes al mes de mayo del presente año, con el desglose siguiente:

Concepto	Importe
Fondo General de Participaciones	$906,612.00
Fondo de Fomento Municipal	$330,075.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	$18,777.00
Tenencia vehicular	$907.00
Impuesto sobre automóviles nuevos	$17,247.00
Total	$1'273,618.00

"11o. Con fecha 13 de junio del año en curso, el Gobierno del Estado de Morelos efectuó a la cuenta bancaria del Municipio actor, el depósito de las participaciones federales (anticipo), correspondiente a las participaciones correspondientes al mes de junio del presente por la cantidad de $1'080,562.44, en lugar de la cantidad de $1'273,618.00, que correspondían al Municipio actor, por concepto de anticipo de participaciones.

"Es decir, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, retuvo al Municipio actor indebidamente, la cantidad de $193,055.56.

"El depósito efectuado a favor del Municipio, no cubre siquiera el importe del Fondo de Fomento Municipal, el que, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, corresponde el 100% al Municipio.

"Este último hecho nos fue dado a conocer hasta el día 25 de julio de 2014, cuando nos entregaron el estado de cuenta bancario de mi representada, por lo que es a partir de este hecho que me hago conocedor de los actos que en esta vía se le reclaman al titular del Gobierno del Estado.

"12o. El artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones no están sujetas a retenciones, salvo para el pago de obligaciones contraídas por el Municipio, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en el territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, tal y como se desprende de su texto:

"'Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquellas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I, de la presente ley, que podrán ser afectadas para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.'

"13o. La retención de participaciones efectuada por el Ejecutivo del Estado, que pretende prolongarse por todo el resto del ejercicio constitucional, coloca al Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, en una situación de crisis financiera, que pone en riesgo la prestación de los servicios públicos.

"14o. El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan 'así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor'.

"En igual sentido, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Morelos señala, en su primer párrafo, que 'Los Ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor, ...'

"16. La indebida retención de las participaciones federales; es un acto que atenta contra el principio de integridad de los recursos públicos municipales establecidos por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual acudimos ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que se determine que la inconstitucionalidad de dicha afectación. (sic)

"Asimismo, solicitamos que se condene al Ejecutivo del Estado a devolver al Municipio quejoso, las cantidades indebidamente retenidas por concepto de participaciones, así como de los intereses que hubiesen generado.

"Al efecto, debe tenerse presente la tesis jurisprudencial número 46/2004 establecida por el Pleno de esta Corte con motivo de la controversia constitucional número 5/2004, promovida por el Ayuntamiento del Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, de fecha 8 de junio de 2004, aprobada por unanimidad de nueve votos, que en seguida se transcribe:

"...

"'RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO. DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES.'

"...

"15o. Cabe destacar que ahora, hasta la fecha, el titular del Poder demandado ha omitido reintegrar (aunque sea en forma extemporánea) al Municipio que represento las cantidades indebidamente retenidas de las participaciones federales que le corresponden, ya referidas en los numerales 4o. al 10o. que anteceden, no obstante que sigue corriendo el año de vigencia del presupuesto de egresos de donde surge la precisión de los montos de cada ministración de participaciones."

TERCERO.—**Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez.** La parte actora señaló como precepto violado el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de invalidez que enseguida se transcribe:

"Único. El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza, en su inciso b), el derecho de los Municipios a recibir las participaciones federales, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"Por su parte, el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones que correspondan a los Municipios son inembargables, que no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquellas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I, de la presente ley, que podrán ser afectadas para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

"En contravención a los artículos 115, fracción IV, inciso b) y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, efectuó la retención al Municipio actor, de participaciones federales por la cantidad total de $780,555.58 (setecientos ochenta mil quinientos cincuenta y cinco 58/100 M.N.), vulnerando el principio de integridad de los recursos municipales deducido del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Conforme a dicho principio el Municipio no recibió de manera puntual, efectiva y completa de recursos federales ni del Fondo de Fomento Municipal, lo que impidió al Municipio disponer oportunamente de dichos recursos.

"En tales condiciones, resulta procedente declarar la invalidez de la retención indebida de las participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, y condenar al Poder Ejecutivo demandado a la entrega inmediata de tales retenciones."

CUARTO.—**Trámite.** Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil catorce, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 81/2014 y, por razón de turno, se designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.

Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil catorce, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que formulara su contestación.

Por escrito presentado el dos de septiembre de dos mil catorce, el delegado del Municipio actor solicitó la suspensión de los actos impugnados, por lo que, por auto de cuatro de septiembre siguiente, el Ministro instructor ordenó formar el cuaderno relativo con motivo del incidente de suspensión solicitado por la parte actora.[1]

[1] En diverso acuerdo dictado con la misma fecha en el cuaderno incidental, el Ministro instructor concedió la suspensión solicitada para que la autoridad demandada, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de Hacienda Estatal, se abstenga de ejecutar cualquier orden, instrucción o requerimiento que tenga como finalidad retener, descontar o afectar en

QUINTO.—**Contestación a la demanda del Poder Ejecutivo.** Mediante oficio 4325/2014, recibido el veinte de octubre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y representante legal de dicho Poder dio contestación a la demanda, señalando lo siguiente:

"I. Entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que los represente:

"Respecto a este apartado, es dable oponer la falta de legitimación ad causam del Municipio actor, toda vez que no existen los elementos de la acción que hacen valer mediante la presente controversia constitucional, tomando en consideración que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, del cual soy representante legal, no ha realizado acto alguno que afecte la libre administración de su hacienda, lo que provoca que la actora carezca del derecho a demandar la invalidez de los actos que señala respecto del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

"II. Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio:

"Correlativa a la ausencia de legitimación *ad causam* activa del Municipio actor, en el caso presente se actualiza la falta de legitimación *ad causam* pasiva del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos que represento, en razón de que no ha realizado acto alguno que constituya una afectación a su libre administración.

"III. Entidades, poderes u órgano terceros interesados y su domicilio:

"No existen.

"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:

"Como se demostrará al abordar los capítulos relativos a los hechos y conceptos de invalidez del Municipio actor, resulta improcedente su pretensión para que ese Alto Tribunal determine la invalidez de los actos que impugna.

"V. Preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados:

---

cualquier forma, sin autorización del Municipio actor, los subsecuentes pagos de participaciones y/o aportaciones que constitucional y legalmente le corresponden, hasta en tanto se dicta sentencia definitiva en la presente controversia constitucional.

"Contrariamente a lo que afirma el impetrante el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en ningún momento ha incurrido en violación a los dispositivos constitucionales que señala, como se demostrará.

"VI. Manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyen los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demanda:

"1o. Es cierto

"2o. Es cierto

"3o. Es cierto

"4o. No es cierto

"No existe retención afectación a la autonomía municipal en cuanto a la libre administración hacendaria.

"Con fecha 14 de enero de 2014, el Cabildo del Municipio actor autorizó la obtención de un empréstito por $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) al Poder Ejecutivo del Estado, para afrontar compromisos del mismo, con cargo de sus participaciones federales futuras, autorizando a la Secretaría de Hacienda a realizar los respectivos descuentos, en base al calendario y cantidades que se anexan que, como se observará, coinciden en cantidades y meses, con los descuentos que mencionan en sus hechos 5, 7 y 9 de su demanda.

"Así, los descuentos son consecuencia directa de la autorización expresa que otorgó el Cabildo del Municipio actor, con participación de su presidente municipal, y del mismo síndico Municipal, ahora promovente de la demanda.

"VII. Conceptos de invalidez

"Son fundados los conceptos de invalidez, pero inaplicables al caso que nos ocupa y, por tanto, inoperantes.

"Su certeza radica en los principios de integridad y libre administración hacendaria de los Municipios, respecto de sus participaciones federales, como su naturaleza de inembargables y no sujeción a retención alguna, con sus excepciones.

"Sin embargo, como se demostrará con los medios de prueba correspondientes, el Municipio actor y el Poder Ejecutivo Estatal demandado, ambos en ejercicio de sus respectivas facultades de libre administración de sus pro-

pias participaciones federales, el primero, solicitó anticipos o adelantos que no son más que préstamos (por su condición de devolución) de participaciones federales futuras y, el segundo, en apoyo solidario, institucional y de buena fe también, le prestó al primero las cantidades que le solicitó, de sus propias participaciones federales recibidas y en sus cuentas de Tesorería General, para evitar que el Municipio actor (igual que 29 Municipios más de los 33 que integran el Estado de Morelos) iniciaría su administración con serios problemas financieros, que ya existían y estaban en crisis en diciembre de 2012, es decir, antes de que iniciara el periodo administrativo actual (enero de 2013 a diciembre de 2015).

"Es inadmisible que el Municipio actor utilice la controversia constitucional y las bondades de la suspensión de actos reclamados que prevé, para evadir 'legítimamente' su compromiso asumido, al margen de si agradece o no el apoyo recibido y el habérsele brindado las facilidades financieras para evitar conflictos con el personal del propio Ayuntamiento, al que se le debía su segunda quincena de diciembre y primera parte de aguinaldo de 2012, laudos condenatorios en incidentes de inejecución y en riesgo de destitución.

"El procedimiento de excepción para afectar el Fondo de Fomento Municipal y/o los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, en tratándose de éstos, requiere, además, de la autorización de la Legislatura Local, para su inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, la garantía solidaria de la entidad federativa, a menos que a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los Municipios tengan suficientes participaciones federales para responder a sus compromisos, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Coordinación Fiscal.

"En primer lugar, había una situación de extrema urgencia que atender en el Municipio actor y 29 más en similar situación, en los que en ninguno se había pagado la segunda quincena y aguinaldo de diciembre de 2012, y agotar el procedimiento pondría en serio riesgo la entrada de las administraciones municipales, entre éstas, la del Municipio actor, debido al tiempo que demora ese proceso.

"Adicionalmente, como un requisito extra es la garantía de la entidad federativa, sería congruente e incompatible que el Estado de Morelos garantizara el pago de lo que prestó al Municipio actor, para inscribir la obligación respectiva.

"Queda claro, además, que el Municipio no tenía ni tiene suficientes participaciones federales para afrontar sus compromisos, puesto que los $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) fueron destinados a

pagar los compromisos más urgentes y riesgosos para la administración municipal, y aun para la administración estatal, porque eran 29 Municipios de los 33, que estaban en colapso financiero e ingobernabilidad inminente.

"Estas razones fueron las que, además de la buena fe, fueron determinantes para que el Ejecutivo Estatal apoyara financieramente al Municipio actor y los demás, pero no fueron recursos regalados o a fondo perdido, sino que desde su petición se asumió el compromiso de reembolsarlos en parcialidades a pagar hasta diciembre de 2015, cuando termina el periodo del actual Ayuntamiento del Municipio actor.

"Los integrantes del Ayuntamiento saben que las probabilidades de éxito de esta contienda son mínimas; su pretensión real es evitar los descuentos de su adeudo, con miras a la obtención del mayor número de votos posibles en las elecciones venideras en el Estado, denominadas 'intermedias', para la renovación del Congreso Local y Ayuntamientos, por lo que buscan prolongar el juicio y, desde luego, la suspensión concedida al Municipio actor, por lo menos a marzo o abril de 2015, situación reprochable e indigna de tutela por efecto reflejo, del abuso que está haciendo el actor de las bondades del medio de defensa de constitucionalidad, como lo es la institución de la controversia constitucional y la suspensión que prevé, incluso, con ampliación de demanda para satisfacer su pretensión oculta.

"Entonces, es falso que el Municipio actor se encuentre infringido en sus derechos de libre administración hacendaria e integridad de sus participaciones federales, porque la cantidad faltante en su depósito la recibió en forma adelantada a su expresa petición y aceptación de la forma de pago, en cantidades que sumaron $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) y que se le descontará en parcialidades para no afectar sus finanzas.

"Por lo tanto, es procedente que se declare procedente pero infundada la controversia constitucional.

"Con independencia de los argumentos expresados, se solicita la suplencia de la queja, en términos del artículo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

SEXTO.—**Cierre de instrucción.** Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

SÉPTIMO.—**Radicación en Sala.** Previo dictamen del Ministro instructor, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[2] 1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto,[3] 10, fracción I[4] y 11, fracción V,[5] de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,[6] y tercero[7] del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el

---

[2] "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"…
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."

[3] "Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."

[4] "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

[5] "Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
"…
"V. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de acuerdos generales. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda."

[6] "Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
"I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquellas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.
"Una vez resuelto el problema relacionado con la impugnación de normas generales, el Pleno podrá reservar jurisdicción a las Salas para examinar los conceptos de invalidez restantes, cuando así lo estime conveniente."

[7] "Tercero. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito."

Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Jantetelco, Estado de Morelos, y el Poder Ejecutivo de dicho Estado, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—**Precisión y certeza de los actos impugnados.** Previamente a analizar los aspectos procesales de oportunidad y legitimación, es necesario fijar de manera precisa los actos cuya invalidez demanda el Municipio actor, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 98/2009, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."[8]

De acuerdo con la citada jurisprudencia, para fijar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, este Alto Tribunal debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos; de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.

Del análisis integral, tanto de la demanda, como del resto de las constancias que obran en el expediente, se aprecia que los actos, cuya invalidez se reclama, son los siguientes:

---

[8] El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Jurisprudencia publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página 1536, registro digital: 166985.

"Demandamos la invalidez de las órdenes e instrucciones giradas por el demandado a efecto de retener al Municipio actor, sus participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal.

"La retención ilegal de las participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, efectuada por el Poder demandado y su correspondiente entrega al Municipio actor, con los intereses que corresponda."

Ahora bien, en cumplimiento al artículo 41, fracción I,[9] de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, procede examinar la certeza de los actos cuya invalidez se demanda.

El Municipio actor demanda como acto impugnado las órdenes e instrucciones giradas por el Poder Ejecutivo demandado, así como las retenciones de las participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal.

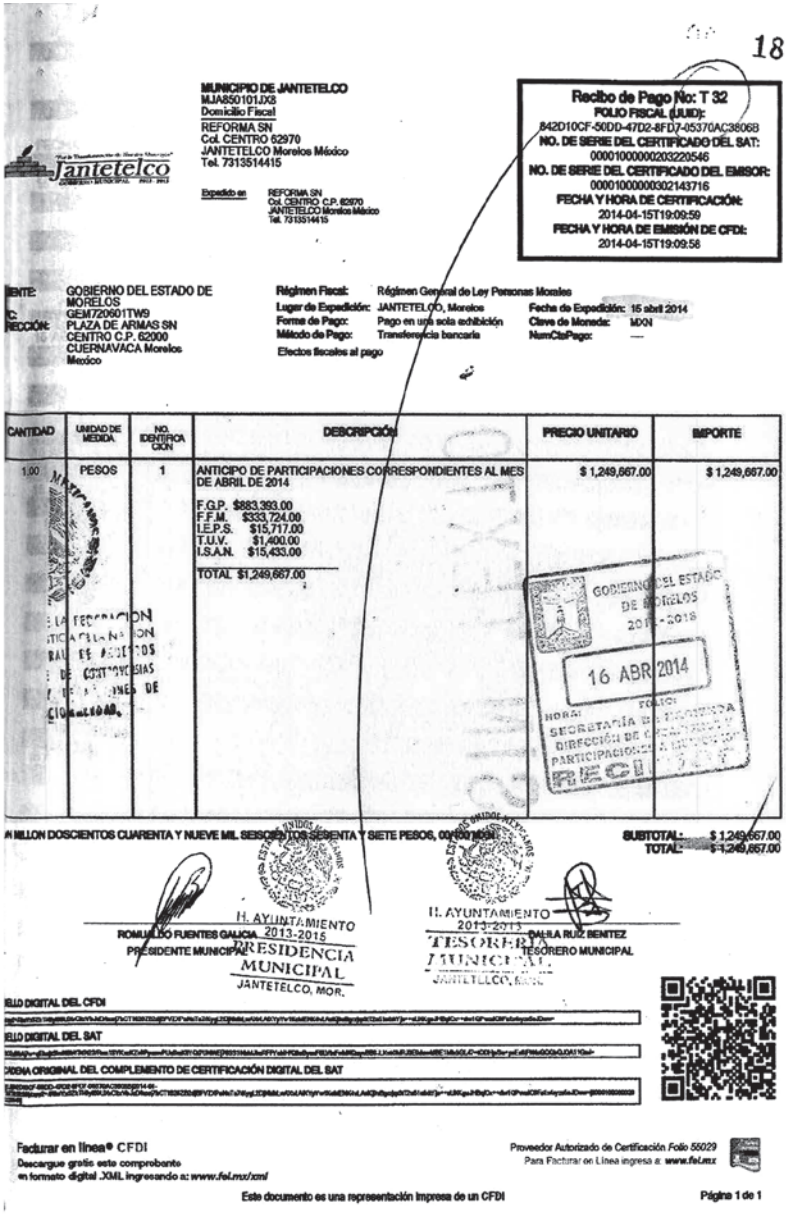
Sin embargo, de las constancias se advierte que no son propiamente retenciones lo demandado, sino los descuentos mensuales de los recursos que le corresponden al Municipio actor por concepto de participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, los cuales, a juicio del Municipio actor, resultan ilegales.

El actor manifiesta que dichos descuentos se desprenden de las cuatro facturas entregadas por la Tesorería Municipal de Jantetelco, Morelos, al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, y de los depósitos correspondientes efectuados por este último al Municipio actor, los cuales se reflejan gráficamente de la siguiente manera:

Número factura	Fecha factura	Fecha depósito	Cantidad factura	Cantidad depósito	Cantidad que aduce a favor
T-16	13/MARZO/14	14/MARZO/14	$1'375,378.00	$1'178,155.77	$197,222.23
T-32	15/ABRIL/14	15/ABRIL/14	$1'249,667.00	$1'053,833.66	$195,833.34
T-46	16/MAYO/14	14/MAYO/2014	$1'240,545.00	$1'046,100.55	$194,444.45
N-221	12/JUNIO/14	13/JUNIO/14	$1'273,618.00	$1'080,562.44	$193,055.56

[9] El citado precepto establece: "Artículo 41. Las sentencias deberán contener: I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados."

Ahora bien, esta Segunda Sala considera que son aptas para acreditar la existencia de los actos reclamados las documentales exhibidas por el Municipio actor, consistentes en las facturas a las que se ha hecho referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:



18

MUNICIPIO DE JANTETELCO
MJA850101JX3
Domicilio Fiscal
REFORMA SN
Col. CENTRO 62970
JANTETELCO Morelos México
Tel. 7313514415

Expedido en: REFORMA SN, Col. CENTRO C.P. 62970, JANTETELCO Morelos México, Tel. 7313514415

Recibo de Pago No: T 32
FOLIO FISCAL (UUID):
842D10CF-50DD-47D2-8FD7-05370AC3806B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302143716
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-04-15T19:09:59
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-04-15T19:09:58

ENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C: GEM720601TW9
RECCIÓN: PLAZA DE ARMAS SN, CENTRO C.P. 62000, CUERNAVACA Morelos, México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: JANTETELCO, Morelos
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Transferencia bancaria
Efectos fiscales al pago
Fecha de Expedición: 15 abril 2014
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: —

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PESOS	1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 F.G.P. $883,393.00 F.F.M. $333,724.00 I.E.P.S. $15,717.00 T.U.V. $1,400.00 I.S.A.N. $15,433.00 TOTAL $1,249,667.00	$ 1,249,667.00	$ 1,249,667.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2012 - 2018
16 ABR 2014
FOLIO:
HORA:
SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
PARTICIPACIONES
RECIBIDO

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 M.N.

SUBTOTAL: $ 1,249,667.00
TOTAL: $ 1,249,667.00

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
ROMUALDO FUENTES GALICIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JANTETELCO, MOR.

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
LAURA RUIZ BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
JANTETELCO, MOR.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

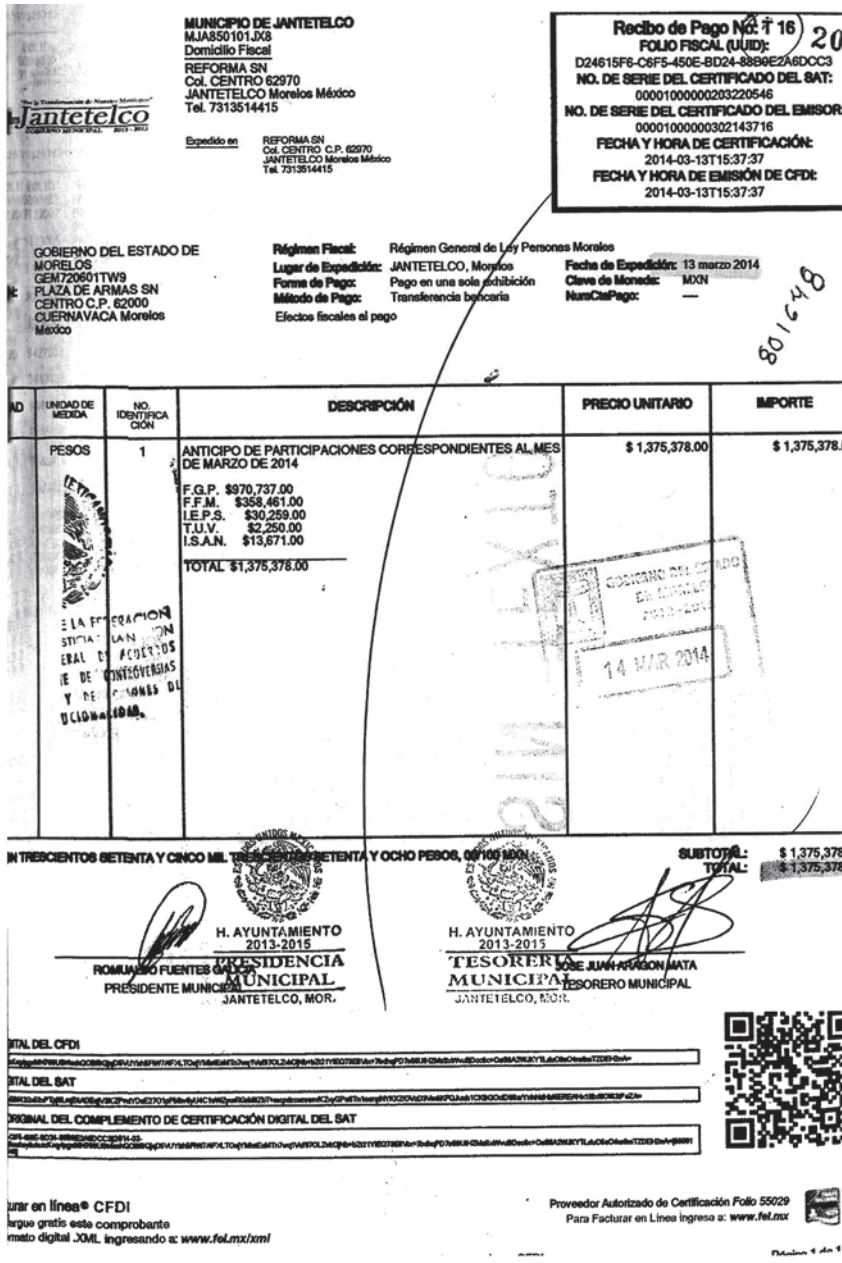
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



MUNICIPIO DE JANTETELCO
MJA850101JX8
Domicilio Fiscal
REFORMA SN
Col. CENTRO 62970
JANTETELCO Morelos México
Tel. 7313514415

Expedido en REFORMA SN
Col. CENTRO C.P. 62970
JANTETELCO Morelos México
Tel. 7313514415

Recibo de Pago No. 1 16 20
FOLIO FISCAL (UUID):
D24615F6-C6F5-450E-BD24-88B9E2A6DCC3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302143716
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-03-13T15:37:37
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-03-13T15:37:37

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
GEM720601TW9
PLAZA DE ARMAS SN
CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA Morelos México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: JANTETELCO, Morelos
Fecha de Expedición: 13 marzo 2014
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Transferencia bancaria
NumCtaPago: ---
Efectos fiscales al pago

801648

AD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	PESOS	1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2014 F.G.P. $970,737.00 F.F.M. $358,461.00 I.E.P.S. $30,259.00 T.U.V. $2,250.00 I.S.A.N. $13,671.00 TOTAL $1,375,378.00	$ 1,375,378.00	$ 1,375,378.00

N TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL [illegible] SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: $ 1,375,378.0
TOTAL: $ 1,375,378.0

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ROMUALDO FUENTES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
JANTETELCO, MOR.

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
TESORERÍA MUNICIPAL
JOSE JUAN ARAGON MATA
TESORERO MUNICIPAL
JANTETELCO, MOR.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2012-2018
14 MAR 2014

ITAL DEL CFDI

ITAL DEL SAT

ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

urar en línea® CFDI
argue gratis este comprobante
rmato digital XML ingresando a: *www.fel.mx/xml*

Proveedor Autorizado de Certificación *Folio 55029*
Para Facturar en Línea ingresa a: *www.fel.mx*

Página 1 de 1

804988

14

MUNICIPIO DE JANTETELCO
MJA850101JD8
Domicilio Fiscal
REFORMA SN
Col. CENTRO 62970
JANTETELCO Morelos México
Tel. 7313514415

Expedido en: REFORMA SN
Col. CENTRO C.P. 62970
JANTETELCO Morelos México
Tel. 7313514415

Recibo de Pago No: N 221
FOLIO FISCAL (UUID):
11F0B3B8-DA9A-42E3-894D-E8EF444891BC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302143716
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-06-12T08:38:50
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-06-12T08:38:49

ENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C: GEM720601TW9
ECCIÓN: PLAZA DE ARMAS SN
CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA Morelos
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: JANTETELCO, Morelos
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Fecha de Expedición: 12 junio 2014
Clave de Moneda: MXN
Efectos fiscales al pago

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PESOS	1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014 F.G.P. $ 906,612.00 F.F.M. $330,075.00 I.E.P.S. $18,777.00 T.U.V. $907.00 I.S.A.N. $17,247.00 TOTAL $1,273,618.00	$ 1,273,618.00	$ 1,273,618.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 2012 - 2018
12 JUN 2014
Juan 1:36

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL $ 1,273,618.00
TOTAL $ 1,273,618.00

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015 PRESIDENCIA MUNICIPAL JANTETELCO, MOR.
ROMUALDO FUENTES CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015 TESORERIA MUNICIPAL JANTETELCO, MOR.
DIOLA RUIZ BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL CFDI

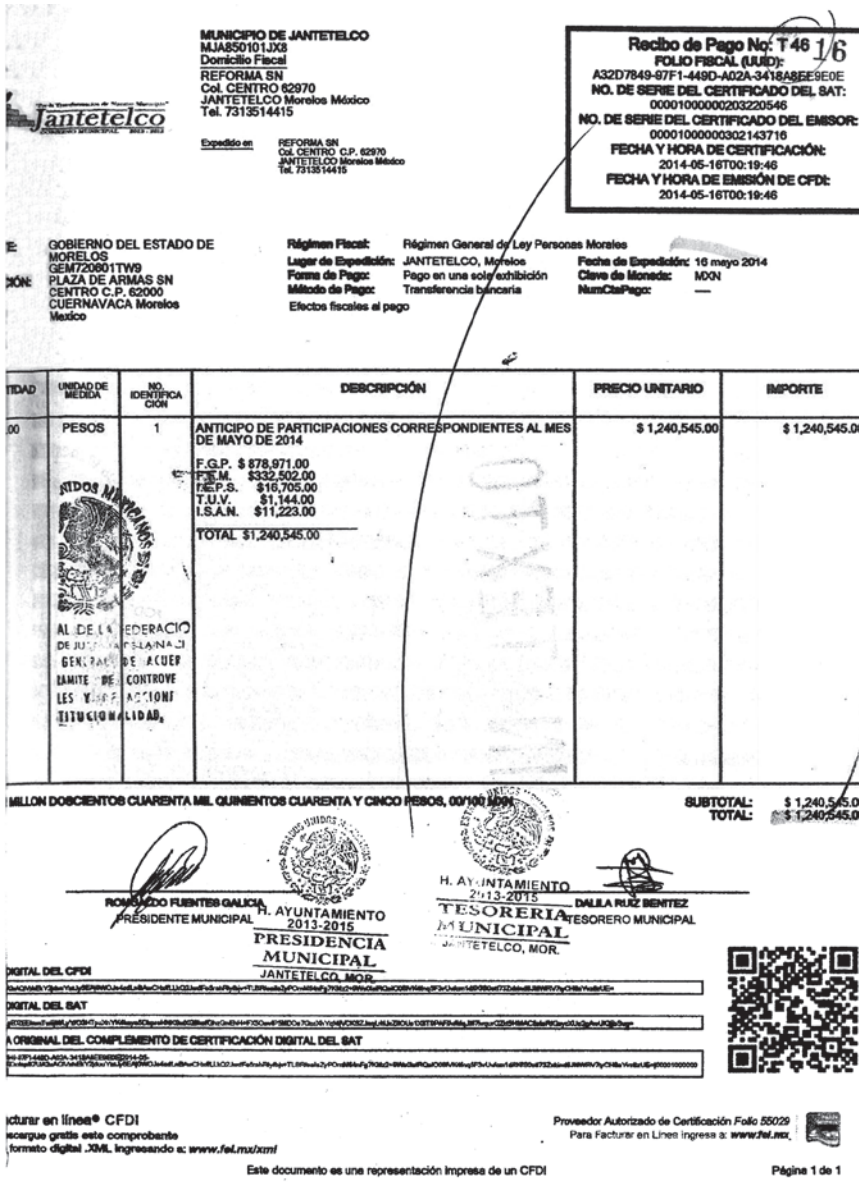
SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificac
Para Facturar en Línea ingresa

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE JANTETELCO
MJA850101JX8
Domicilio Fiscal
REFORMA SN
Col. CENTRO 62970
JANTETELCO Morelos México
Tel. 7313514415

Expedido en: REFORMA SN Col. CENTRO C.P. 62970 JANTETELCO Morelos México Tel. 7313514415

Recibo de Pago No: T 46 1/6
FOLIO FISCAL (UUID):
A32D7849-97F1-449D-A02A-3418A8EE9E0E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302143716
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2014-05-16T00:19:46
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2014-05-16T00:19:46

E: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
GEM720801TW9
CIÓN: PLAZA DE ARMAS SN
CENTRO C.P. 62000
CUERNAVACA Morelos
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: JANTETELCO, Morelos
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Transferencia bancaria
Efectos fiscales al pago
Fecha de Expedición: 16 mayo 2014
Clave de Moneda: MXN
NumCtaPago: —

TIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
00	PESOS	1	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2014 F.G.P. $ 878,971.00 F.F.M. $332,502.00 F.E.P.S. $16,705.00 T.U.V. $1,144.00 I.S.A.N. $11,223.00 TOTAL $1,240,545.00	$ 1,240,545.00	$ 1,240,545.00

MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

SUBTOTAL: $ 1,240,545.00
TOTAL: $ 1,240,545.00

ROSALDO FUENTES GALICIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL
JANTETELCO, MOR.

H. AYUNTAMIENTO 2013-2015
TESORERIA MUNICIPAL
JANTETELCO, MOR.
DALILA RUIZ BENITEZ
TESORERO MUNICIPAL

DIGITAL DEL CFDI
DIGITAL DEL SAT
A ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

cturar en línea® CFDI
escargue gratis este comprobante
formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Linea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

Por otra parte, las fichas de depósito en las que se hacen constar las cantidades depositadas por el Poder Ejecutivo Local al Municipio actor, son las siguientes:

Banamex

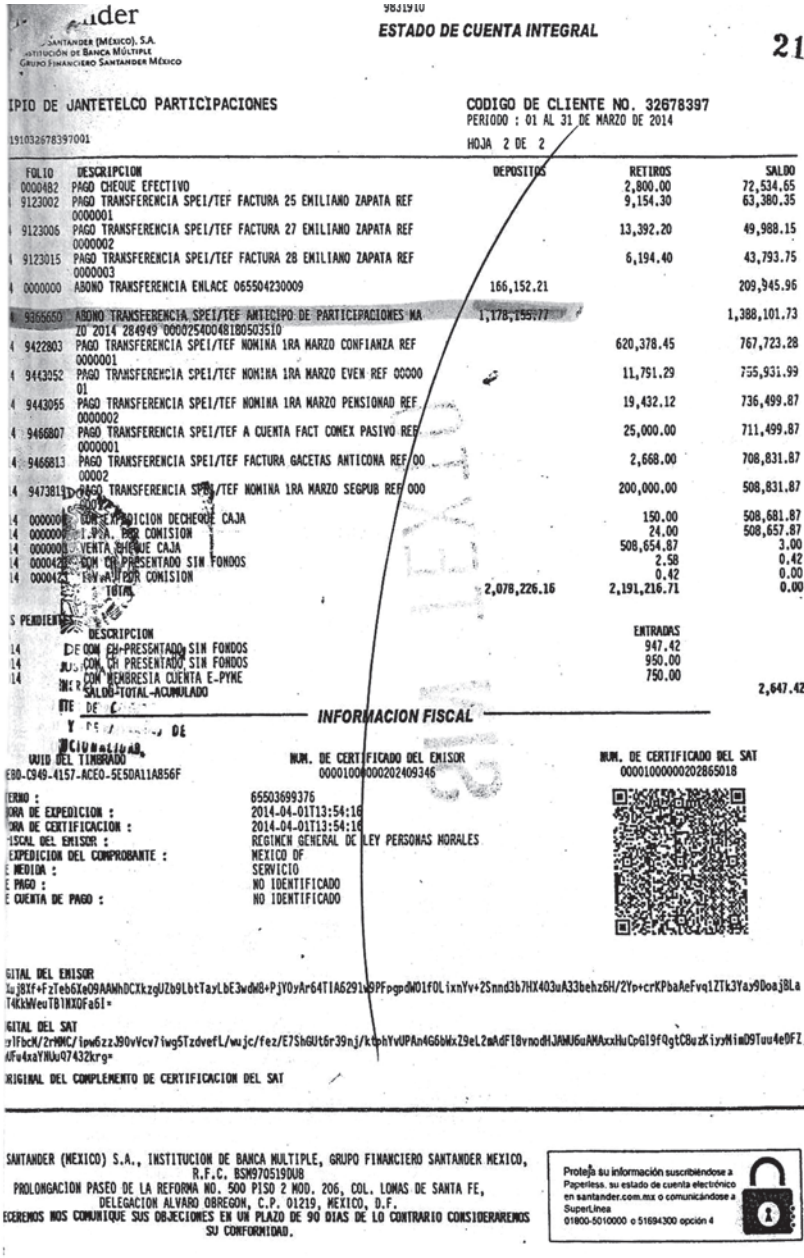
CLIENTE: 103061765.
Página: 5 de 8

MUNICIPIO DE JANTETELCO.

19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE OP. ABRIL		1,500.00	70,265.39
15 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	7,300.00		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014041500211182 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	INVESTIGACIONES GEOFISICAS DE			
	MEXICO SA D SU REF.0000001			
	PAGO DE PROYECTOS EJECUTIVOS			
	0059021180931054			
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014041500215809 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF.			
	CRUZ LA CRUZ PANTEZ SU			
	REF.0000002 QUINCENA TESORERA			
	0059021180931054			
15 ABR	TRASPASO REF 90300035611 AUT.			
	1665 SER BCA ELEC.			
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE TESORERIA			
	REF.000000097027 POR CONCEPTO			
	PARTICIPACIONES ABRIL 2014			
	17265 SER BCA ELEC.	700,000.00		
	0014041500325525 A BANCO			
	RAFAEL VERGARA ROMERO SU			
	0659032552503105 47	133,333.33		272,965.72
16 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	37,000.00		
	0014041600229333 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SABINO			
	RAFAEL VERGARA ROMERO SU			
	VERG511025PM1			
16 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	MERCAN N AL BENEF.			
	REF.0000012 PAPELERIA PASIVO			
16 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AUTORIZACION 000083194601	9,400.00		71,202.98
21 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA NUM DE AUTORIZACION			



9831910

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL 21

SANTANDER (MÉXICO). S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

IPIO DE JANTETELCO PARTICIPACIONES

CODIGO DE CLIENTE NO. 32678397
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2014
HOJA 2 DE 2

191032678397001

FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0000482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	72,534.65
9123002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 25 EMILIANO ZAPATA REF 0000001		9,154.30	63,380.35
9123006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 27 EMILIANO ZAPATA REF 0000002		13,392.20	49,988.15
9123015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA 28 EMILIANO ZAPATA REF 0000003		6,194.40	43,793.75
0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504230009	166,152.21		209,945.96
9366650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MA ZO 2014 284949 00002540048180503510	1,178,155.77		1,388,101.73
9422803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 1RA MARZO CONFIANZA REF 0000001		620,378.45	767,723.28
9443052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 1RA MARZO EVEN REF 00000 01		11,791.29	755,931.99
9443055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 1RA MARZO PENSIONAD REF 0000002		19,432.12	736,499.87
9466807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF A CUENTA FACT CONEX PASIVO REF 0000001		25,000.00	711,499.87
9466813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF FACTURA GACETAS ANTICONA REF 00 00002		2,668.00	708,831.87
9473813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF NOMINA 1RA MARZO SEGPUB REF 000 0000		200,000.00	508,831.87
0000000	COM EXPEDICION DECHEQUE CAJA		150.00	508,681.87
0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	508,657.87
0000000	VENTA CHEQUE CAJA		508,654.87	3.00
0000423	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		2.58	0.42
0000423	IVA POR COMISION		0.42	0.00
	TOTAL	2,078,226.16	2,191,216.71	0.00

S PENDIENTES

	DESCRIPCION	ENTRADAS	
14	DE CON CH-PRESENTADO SIN FONDOS	947.42	
14	CON CH PRESENTADO SIN FONDOS	950.00	
14	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME	750.00	
	SALDO-TOTAL-ACUMULADO		2,647.42

NTE DE C...
Y DE ...
...cultad,

INFORMACION FISCAL

FOLIO FISCAL DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
EB0-C949-4157-ACE0-5E5DA1A856F	00001000000202409346	00001000000202865018

ERMO :	65503699376
ORA DE EXPEDICION :	2014-04-01T13:54:16
ORA DE CERTIFICACION :	2014-04-01T13:54:16
ISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
E MEDIDA :	SERVICIO
E PAGO :	NO IDENTIFICADO
E CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO

GITAL DEL EMISOR
jBIf+FzTeb6XeO9AAWhDCXkzgUZb9LbtTaxLbE3wdW8+PjYOyAr64TIA6291w9PFpgpdWO1fOLixnYv+2Snnd3b7HX403uA33behz6H/2Yp+crKPbaAeFvq1ZTk3Yay9DoajBLa
T4KkWeuTBlNXOFa6I=

GITAL DEL SAT
lFbcK/2rMMC/ipw6zzJ9OvVcv7iwg5TzdvefL/wujc/fez/E7ShGUt6r39nj/ktphYvUPAn4G6bWxZ9eL2mAdFI8vnodHJAMJ6uAMAxxHuCpGI9fQgtC8uzKiyxNimD9Tuu4eDFZ
AFu4xaYNUuQ7432krg=

RIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
ECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless. su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4

15

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 103061765

Página: 6 de 13

MUNICIPIO DE JANTETELCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 138			
	SUC 4380			
	CAJA 0002 AUT 03957853 HORA 14:58	10,000.00		
11 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	APOYO ECONOMICO MEDI NUM DE			
	AUTORIZACION 000023843501			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 19:20 SUC 0870	3,000.00		
11 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 138			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 4380	900.00		
11 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 4380	144.00		
11 JUN	COMISION CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA 138			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0150	900.00		
11 JUN	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO			
	VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0150	144.00		77,368.46
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143			
	SUC 9030			
	CAJA 0004 AUT 05176379 HORA 11:01	16,027.93		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144			
	SUC 9030			
	CAJA 0004 AUT 05176379 HORA 11:01	6,269.00		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142			
	SUC 9030			
	CAJA 0004 AUT 05176379 HORA 11:01	7,725.64		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145			
	SUC 9030			
	CAJA 0004 AUT 05176379 HORA 11:01	6,000.00		41,345.89
13 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLZ LOS ARCOS MOR			
	CAJA 0001 AUT 05169445			
	HORA 11:16 SUC 9030		109,291.79	
	DEP CHEQUE CAJA 109,291.79			
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE TESORERIA			
	GENERAL DEL GOBIERNO			
	REF.000000100247 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES ANTICIPO MES			
	DE JUNIO 2014			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0870		1,080,562.44	
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	001406130025783 1 FACT 165 AL			
	BENEF BARBARA			
	ALLISON,SANTANA/GARCIA SU			
	REF.0000000001 FACT 165			
	0000000000001211796			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0870	6,871.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	001406130025879 0 FACT 172 AL			
	BENEF BARBARA			
	ALLISON,SANTANA/GARCIA SU			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE: 103061765

Página: 4 de 10

17

MUNICIPIO DE JANTETELCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANTONIO,RODRIGUEZ/POZOS SU			
	REF.0000000003 40 LITROS DE			
	NEBULIZAR 00000000000007392886	13,804.00		423,072.32
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0014050900165032 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MAURICIO			
	JAVIER,AVILA/BAUTISTA SU			
	REF.0000001 JARDIN GITLALTEPEC			
	085901650320312946	34,800.00		
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 58			
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	24,360.32		
09 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ADELANTO ROGELIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000057726802			
09 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	4,000.00		
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014050900262425 COMEX FACT			
	531897A 485 AL BENEF.			
	JAIR,REYES/GARCIA SU			
	REF.0000000003 COMEX FACT			
	531897A 485			
	0000030000000410945			
09 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014050900417818 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	ARIEL ARCOS RODRIGUEZ SU			
	REF.0000004 PAGO 5 UNIFORMES			
	0000027181000000410945			
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 60	20,000.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 61			
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	4,800.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62			
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63	19,250.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65			
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	9,280.00		
13 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0014051390135581 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF.			
	JAVIER,ROBLES/AREVALO SU			
	REF.0000001 MANTENIMIENTO			
	MECANICO 085901355810313949	12,820.36		
13 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ADELANATO DE AGUINA NUM DE			
	AUTORIZACION 000019926802			
14 MAY	PAGO RECIBIDO DE TESORERIA			
	GENERAL DEL GOBIERNO			
	REF.000000096322 POR CONCEPTO			
	DE APORTACIONES FORTAMUN			
	DE MAYO 2014		1,046,100.55	1,260,372.92
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	abril NUM DE AUTORIZACION			
	000029400802			
15 MAY	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014051500115897 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	JEIMI,MUNGUIA/AGUILAR SU			
	REF.0000001 PAPELERIA MES DE			
	ABRIL 085001158670315248			
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69	28,950.00		
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 67			
15 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	22,853.03		546,646.09

Dichas documentales fueron exhibidas en original por el Municipio actor y son aptas para acreditar la existencia de los actos reclamados, en tanto que en ellas obran las cantidades que fueron presentadas para cobro y las que le fueron entregadas; además de que se trata de documentales que no fueron objetadas, sino por el contrario, reconocidas por las partes.

TERCERO.—**Oportunidad.** Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

Al respecto, debe precisarse que la presente controversia constitucional se promovió en contra de las órdenes e instrucciones giradas por el Poder Ejecutivo, para realizar los descuentos mensuales de forma ilegal de las participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, así como las entregas e intereses correspondientes.

Ahora bien, respecto de la impugnación de actos, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[10] que establece que el plazo para la presentación de la demanda será:

a) Tratándose de actos: treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

b) Tratándose de normas generales: treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

En el caso, como se precisó, el Municipio actor impugna los descuentos mensuales que se realizaron de forma ilegal a las participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, así como las entregas e intereses correspondientes, a partir de los meses de marzo a mayo de dos mil catorce, respecto de los cuales aduce que, al ser estas omisiones en las que incurrió el Poder

[10] "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Ejecutivo, el plazo para su cómputo se actualiza día a día; mientras que por los descuentos del mes de junio de dos mil catorce, hechos por el Poder Ejecutivo, tuvo conocimiento el **veinticinco de julio de dos mil catorce**, cuando le entregan el estado de cuenta bancario.

Luego, al impugnarse actos concretos y no normas generales, debe aplicarse el plazo previsto en el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, esto es, de treinta días a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Ahora bien, el Pleno de este Alto Tribunal, al fallar la diversa controversia constitucional 20/2005, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil siete, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

"De lo anterior se advierte que el Municipio reclamante solicita a través de la presente controversia constitucional se condene al Gobierno del Estado de Guerrero a la regularización en el pago oportuno de las participaciones federales que le corresponden y además a que le sean resarcidos los daños y perjuicios que supuestamente le fueron ocasionados por las entregas retrasadas de los recursos correspondientes a los años dos mil, dos mil uno, dos mil dos, dos mil tres, dos mil cuatro e, inclusive, los recursos correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil cinco.—Como se ha destacado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, tratándose de actos concretos, la demanda debe ser presentada dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto o actos reclamados o su ejecución.—Acorde con lo anterior **si, en el caso, lo que se reclaman son actos concretos, que tuvieron lugar en diferentes momentos, según se desprende de la columna número cuatro (fecha cheque) citada en el hecho 6 del escrito de demanda (foja 16 del expediente) y que se fueron actualizando mes con mes, es inconcuso que la presentación de la demanda debió realizarse dentro del término de treinta días a que se refiere el precepto antes citado, es decir, dentro de los treinta días en que se fue actualizando cada una de las entregas extemporáneas reclamadas en la presente instancia; es decir las participaciones mensuales, relativas a cada uno de los años señalados por el Municipio actor**.—Ahora bien, si la presentación de la demanda que nos ocupa tuvo verificativo el día siete de marzo de dos mil cinco, según aparece del sello de la Oficina de Certificación Judicial

y Correspondencia de este Alto Tribunal, es inconcuso que tal presentación resultó extemporánea, en relación con la solicitud de pago de intereses relativo a la entrega de participaciones federales relativas a los años dos mil a dos mil cuatro, ya que fue presentada una vez que ya habían transcurrido con exceso los treinta días a que se refiere la fracción I del artículo 21 de la ley de la materia.—Desde luego, la extemporaneidad mencionada no se actualiza respecto de las dos últimas mensualidades reclamadas, es decir, las correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil cinco, ya que, respecto de tales meses, la presentación de la demanda resultó oportuna, puesto que el término de treinta días a que se alude debió empezar a contar a partir del día siguiente en que tuvo verificativo el pago relativo al mes de enero de dos mil cinco (23 de febrero de 2005, foja 111 del presente toca), o sea, el día veinticuatro de febrero de dos mil cinco y concluía el doce de abril del mismo año, cuando la demanda fue presentada, como se ha visto, el siete de marzo de dos mil cinco."

El criterio transcrito es aplicable al caso concreto,[11] ya que, tratándose de los descuentos en las participaciones efectuadas por el Ejecutivo del Estado que fueron efectuando mes con mes sobre los recursos federales que debía recibir el Municipio actor, lo que, aduce, le provocó una entrega incompleta de sus recursos.

Ahora bien, el Municipio actor hizo mención de que tuvo conocimiento del último descuento, es decir, por lo que se refiere al mes de junio, que se realizó por parte del Poder Ejecutivo del Gobierno el veinticinco de julio de dos mil catorce, cuando se le entregó el estado de cuenta bancario.

Sin embargo, no hace referencia al momento en que tuvo conocimiento de los descuentos realizados de los meses de marzo a mayo. No obstante, de los hechos relatados y de las pruebas ofrecidas en el escrito de demanda se desprende que los depósitos de las participaciones federales por concepto de anticipo de los meses de marzo a mayo, reflejados en los estados de cuenta, se realizaron en las siguientes fechas:

---

[11] Cabe señalar que el mismo criterio sostuvo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las controversias constitucionales 5/2007 y 8/2007, promovidas por diversos Municipios del Estado de Morelos y por el Municipio de Jiutepec, Estado de Morelos, respectivamente, así como la Primera Sala de este Alto Tribunal en las sentencias dictadas en las controversias constitucionales 100/2008 a 131/2008, promovidas por diversos Municipios del Estado de Sonora, ya que en dichas controversias constitucionales se tuvo como impugnada una entrega incompleta y retrasada de los ingresos que le correspondían a cada Municipio.

Con fecha **trece de marzo de dos mil catorce**, la Tesorería Municipal de Jantetelco, Morelos, entregó al Ejecutivo del Estado el recibo de pago T-16, por la cantidad de $1'375,378.00.	El **catorce de marzo de dos mil catorce**, el Gobierno del Estado de Morelos efectuó a la cuenta bancaria del Municipio actor, el depósito de las participaciones federales (anticipo), correspondientes al mes de marzo por la cantidad de $1'178,155.77.
Con fecha **quince de abril de dos mil catorce**, la Tesorería Municipal de Jantetelco, Morelos, entregó al Ejecutivo del Estado el recibo de pago T-32, por la cantidad de $1'249,667.00.	El **quince de abril de dos mil catorce**, el Gobierno del Estado de Morelos efectuó a la cuenta bancaria del Municipio actor, el depósito de las participaciones federales (anticipo) correspondientes al mes de abril por la cantidad de $1'053,833.66.
Con fecha **dieciséis de mayo de dos mil catorce**, la Tesorería Municipal de Jantetelco, Morelos, entregó al Ejecutivo del Estado el recibo de pago T-46, por la cantidad de $1'240,545.00.	El **catorce de mayo de dos mil catorce**, el Gobierno del Estado de Morelos efectuó a la cuenta bancaria del Municipio actor, el depósito de las participaciones federales (anticipo) correspondientes al mes de mayo por la cantidad de $1'046,100.55.

De esta manera, en cuanto al **primer depósito**, de catorce de marzo de dos mil catorce, el plazo de treinta días comenzó a partir del día hábil siguiente al en que se tuvo conocimiento, es decir, el dieciocho siguiente, y concluyó el viernes dos de mayo de dos mil catorce, descontando del cómputo los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo; cinco, seis, doce, trece, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de abril, así como uno de mayo, todos de dos mil catorce, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General Plenario Número 18/2013.

Respecto del **segundo depósito**, de quince de abril de dos mil catorce, el plazo de treinta días comenzó a partir del día hábil siguiente al en que se tuvo conocimiento de él, es decir, el veintiuno de abril siguiente, y concluyó el martes tres de junio de dos mil catorce, descontando del cómputo los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de abril;

uno, tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de mayo, así como uno de junio, todos de dos mil catorce, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General Plenario Número 18/2013.

Asimismo, en cuanto al **tercer depósito**, de catorce de mayo de dos mil catorce, el plazo de treinta días comenzó a partir del día hábil siguiente al en que se tuvo conocimiento de él, es decir, el quince de mayo siguiente, y concluyó el veinticinco de junio de ese año, descontando del cómputo los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de mayo de dos mil catorce, así como uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de junio del mismo año, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General Plenario Número 18/2013.

De esta manera, si el escrito de demanda de controversia constitucional fue presentado el veinticinco de agosto de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, respecto de los descuentos de los meses de marzo, abril y mayo de dicho año, el medio de control constitucional presentado resulta extemporáneo, en virtud de que transcurrió en exceso el plazo de treinta días a que se refiere la fracción I del artículo 21 de la ley de la materia.

Por tal motivo, con fundamento en los artículos 19, fracción VII y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al actualizarse la causa de improcedencia apuntada, se impone sobreseer en la controversia constitucional, únicamente respecto de los descuentos realizados en los meses de marzo, abril y mayo, todos de dos mil catorce, al haber transcurrido en exceso el plazo de treinta días para presentar la demanda de controversia constitucional.

Sin embargo, la demanda es oportuna respecto del descuento realizado el mes de junio de dos mil catorce. Si bien éste se realizó el día trece de junio de dos mil catorce, lo cierto es que el Municipio actor manifestó que tuvo conocimiento hasta el veinticinco de julio de dos mil catorce. Así, partiendo de esta última fecha, en la que el Municipio actor aduce que tuvo conocimiento

del acto impugnado, entonces, el plazo de treinta días comenzó al día hábil siguiente, es decir, uno de agosto, y concluyó el once de septiembre de dos mil catorce, descontando del cómputo los días veintiséis a treinta y uno de julio de dicho año, por corresponder al primer periodo vacacional de este Alto Tribunal, así como los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta y uno de agosto del presente año, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 3o. y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General Plenario Número 18/2013.

Por lo tanto, si la demanda de controversia constitucional se presentó el veinticinco de agosto de dos mil catorce, como se mencionó anteriormente, resulta oportuna respecto del último descuento a las participaciones del Municipio actor que se llevó a cabo el día trece de junio de dos mil catorce.

CUARTO.—**Legitimación activa.** A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.

El artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[12] establece que el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y que, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el presente asunto, suscribe la demanda, en representación del Municipio de Jantetelco, Morelos, Nicolás Flores López, en su carácter de síndico municipal, lo que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría a la planilla ganadora de la elección de Ayuntamiento del Municipio de Jantetelco, expedida por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos.

[12] "Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

Por su parte, el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos[13] establece que el síndico tiene a su cargo la representación del Ayuntamiento.

Así, el síndico municipal que suscribe la demanda cuenta con la facultad de representación del Municipio actor en esta vía; en ese sentido, resulta aplicable la tesis aislada 2a. XXVIII/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS SÍNDICOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA.".[14] Además de que el Municipio es uno de los entes legitimados para promover una controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, constitucional.

QUINTO.—**Legitimación pasiva.** Acto continuo, se analizará la legitimación de la parte demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dicha parte es la obligada por la ley para satisfacer la pretensión de la parte actora, en caso de que ésta resulte fundada.

El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia establece que tendrá el carácter de demandado, la entidad, poder u órgano que hubiera emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia.[15]

---

[13] "Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones:
"…
"II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos."

[14] El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "El artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que faculta a los Ayuntamientos para promover controversias constitucionales, debe interpretarse en concordancia con el diverso 45, fracción II, del propio ordenamiento, que otorga a los síndicos la atribución de procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales y representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éstos sean parte. De esta forma, el Ayuntamiento ejerce su facultad para promover controversias constitucionales por conducto del síndico, a quien la ley confiere la representación jurídica de dicho órgano de gobierno, así como la procuración y defensa de los derechos e intereses municipales, sin que, para ello, sea necesario emitir un acuerdo de Cabildo en el que se le otorgue tal atribución, al ser la propia ley la que lo faculta para hacerlo.". Jurisprudencia publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, página 1274, registro digital: 2000537.

[15] El precepto dispone:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

En el caso, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos compareció a la presente controversia constitucional por conducto de su representante legal el licenciado Octavio Ibarra Ávila, en su carácter de director general de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, lo que acreditó con copia certificada del nombramiento de fecha catorce de febrero de dos mil trece, cuyas atribuciones, para representar al Poder Ejecutivo de la entidad, se prevén en los artículos 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos[16] y 15, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.[17] Por lo que, en proveído de veintisiete de junio de dos mil trece, se reconoció el carácter de autoridad demandada en este procedimiento al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Local, el Poder Ejecutivo de la entidad se ejerce por el gobernador del Estado, quien está facultado para designar al consejero jurídico, conforme al artículo 70, fracción VI, de la Constitución, quien, a su vez, nombró al director general de Asuntos Constitucionales y Amparo, quien acorde con el artículo 15, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se encuentra facultado para constituirse como delegado del gobernador del Estado de Morelos, en la presente controversia constitucional, por tanto, si, en el caso, éste es quien firma el escrito de contestación de la demanda, es dable concluir que dicho funcionario cuenta con legitimación procesal para comparecer en el presente juicio en representación de ese Poder.

"...
"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

[16] "Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones:
"...
"II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

[17] "Artículo 15. Son atribuciones de la persona titular de la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Amparo, las siguientes:
"...
"II. Representar, con el carácter de apoderado legal, al gobernador, y a las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal, en todos los asuntos de orden constitucional en que sean parte;
"III. Constituirse en delegado del gobernador y demás titulares de las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

SEXTO.—**Causas de improcedencia.** Si bien el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en su escrito de contestación, aduce que el Municipio actor carece de legitimación pasiva para promover la presente controversia constitucional, toda vez que no ha realizado acto alguno que haya afectado la libertad hacendaria del promovente; sin embargo, dicha causal de improcedencia debe desestimarse, ya que se trata de una situación estrechamente relacionada con el fondo del asunto.

Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."[18]

Al no existir otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, distintos de los analizados en los considerandos tercero y cuarto de este fallo, que se advierta de oficio o que hagan valer las partes, se procede al estudio del concepto de invalidez formulado.

SÉPTIMO.—**Estudio.** La materia de estudio en la presente controversia constitucional está relacionada con el análisis de constitucionalidad del descuento realizado al Municipio actor de sus participaciones federales y Fondo de Fomento Municipal correspondientes al mes de junio de dos mil catorce, por concepto de cumplimiento de pago de obligaciones.

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en su escrito de contestación, presentó como prueba el Convenio de Solicitud, Entrega y Reembolso de Apoyo Financiero que celebró éste y el Municipio de Jantetelco, con el objeto de otorgar un apoyo financiero por la cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), como adelanto de los recursos que le corresponden a este último, en virtud de que no contaba con los recursos económicos suficientes, para solventar las necesidad de fin de año, el cual se celebró el catorce de enero de dos mil catorce.

El convenio, en su clausulado, dispone:

---

[18] El texto de dicha tesis es el siguiente: "En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones constitucionales propuestas.". *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, registro digital: 193266, página 710.

"Cláusulas

"Primera. Objeto. El presente convenio tiene por objeto que 'el Poder Ejecutivo' otorgue un apoyo financiero a 'el Municipio' por la cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), mismo que es un adelanto de los recursos que le corresponden a este último, en virtud de que actualmente no cuenta con los recursos económicos suficientes, para solventar las necesidades de fin de año.

"Segunda. Contraprestación. 'el Municipio' se compromete a otorgar como contraprestación por el apoyo financiero que le otorga 'el Poder Ejecutivo' un interés del 10% anual sobre el monto de los saldos insolutos.

"Tercera. Forma de reembolso del apoyo financiero. 'El Municipio' se obliga a reembolsar a 'el Poder Ejecutivo' el monto por concepto de apoyo financiero en la forma siguiente:

"a) La Secretaría de Hacienda de 'el Poder Ejecutivo', realizará mensualmente el descuento correspondiente de los recursos que le corresponden a 'el Municipio'.

"b) A dicho descuento se le sumará la cantidad que resulte por concepto de contraprestación que se establece en la cláusula segunda del presente convenio.

"Las cantidades mensuales que serán descontadas a 'el Municipio' se establecen en el anexo 2.

"Cuarta. 'Las partes' manifiestan de manera libre y espontánea su aceptación en la forma de reembolso propuesta en el presente instrumento, apegándose a los montos y fechas establecidos en las cláusulas primera y segunda; lo anterior por así convenir a los intereses de sus representados con el único objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones en estricto apego a sus facultades y deberes.

"Quinta. Vigencia. El presente convenio entra en vigor a partir de la fecha de su suscripción y concluirá el 31 de diciembre del año 2015.

"Sexta. Competencia. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente convenio, 'las partes' se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. ..."

Asimismo, anexó el acta de Cabildo de sesión extraordinaria del día catorce de enero de dos mil catorce, en la que se aprobó la solicitud de apoyo financiero al Gobierno del Estado, mediante un adelanto de los recursos que le corresponden al Municipio actor, por un plazo improrrogable de veinticuatro meses, aprobando que la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado realice mensualmente descuentos, de la siguiente manera:

"4. Análisis, discusión y aprobación de la solicitud de apoyo financiero al Gobierno del Estado.

"En uso de la palabra, el C. Romualdo Fuentes Galicia presidente municipal constitucional de Jantetelco, Morelos, propone la siguiente iniciativa de solicitar el apoyo financiero al Gobierno del Estado con la finalidad de que el Ayuntamiento pueda dar cumplimiento a sus obligaciones de pago, es importante hacer mención que la cantidad que se otorgue al Municipio por concepto de apoyo financiero es un adelanto que el Poder Ejecutivo hará de los recursos que le corresponden a este Municipio. Dicho apoyo deberá ser cubierto en un plazo improrrogable de 24 meses, sin que pueda excederse el término para ello. Para la realización de lo anterior, asimismo se aprueba que la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, descuente mensualmente la cantidad que resulte de realizar la operación de división del monto total al que asciende el apoyo financiero entre veinticuatro, más los intereses correspondientes, así como solicito se autorice al presidente, al secretario y tesorero de este Ayuntamiento Municipal, a suscribir el instrumento jurídico conducente para la celebración del correspondiente acto jurídico con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, siendo todo lo que desea expresar en este acto.

"Por lo que los presentes acuerdan lo siguiente:

"Acuerdo: Una vez analizada la propuesta anterior y con detenimiento, el H. Cabildo municipal aprobó por unanimidad de votos la propuesta del C. Romualdo Fuentes Galicia presidente municipal constitucional de Jantetelco, misma que consiste en la solicitud de un apoyo financiero por la cantidad de cuatro millones de pesos al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que el Ayuntamiento pueda dar cumplimiento a compromisos y obligaciones financieras, ofreciéndose como contraprestación pagar al Poder Ejecutivo un interés del 10% anual. La cantidad que se otorgue al Municipio por concepto de apoyo financiero es un adelanto que el Poder Ejecutivo hará de los recursos que le corresponden a este Municipio. Dicho apoyo financiero deberá ser cubierto en un plazo improrrogable de veinticuatro meses, sin que pueda excederse el término para ello.

Para la realización de lo anterior, asimismo se aprueba que la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, descuente mensualmente la cantidad que resulte de realizar la operación de división del monto total al que asciende el apoyo financiero entre veinticuatro, más los intereses correspondientes, en tal virtud se autoriza a los CC. Presidente, secretario y tesorero de este Ayuntamiento municipal, a suscribir el instrumento jurídico conducente para la celebración del correspondiente acto jurídico con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, por lo que en ese mismo sentido se instruye por parte de este honorable Cabildo al secretario municipal para que realice las diligencias y comunicaciones pertinentes para que se dé el debido cumplimiento al presente acuerdo, ante la instancia que corresponda. …"

El convenio aludido pone de manifiesto que el Municipio actor celebró un acuerdo de solicitud, entrega y reembolso de apoyo financiero, para el cumplimiento de sus obligaciones de fin de año, respecto del cual se obligó a reembolsar, en forma mensual, el monto por concepto de apoyo financiero a través de descuentos con cargo a los recursos que corresponden al Municipio, así como que aquéllos se realizarían por parte de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, sumando el interés pactado. Y que el desglose de descuentos quedó expresamente establecido en el anexo 2 del convenio.

Lo anterior conduce a declarar infundados los motivos de invalidez, en tanto que, al existir voluntad expresa del Municipio, en el sentido de someterse a ese convenio, no puede considerarse vulnerado el principio de libre administración hacendaria, ni el diverso de integridad, que rigen las participaciones federales.

En efecto, el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal establece:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"…

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

"Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

"b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

"c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

"Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

"Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

Por su parte, los artículos 2o.-A, antepenúltimo párrafo, 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal establecen lo siguiente:

Ley de Coordinación Fiscal

"Artículo 2o.-A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los Municipios, en la forma siguiente: …

"Los Estados entregarán íntegramente a sus Municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las Legislaturas Locales, garantizando que no sea menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de derechos."

"Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.

"La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

"Los Municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta ley.

"Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. Los gobiernos de las entidades, a más tardar el 15 de febrero a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su Periódico Oficial, así como en su página oficial de Internet el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan

obligación de participar a sus Municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ..."

"Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I, de la presente ley, que podrán ser afectadas para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

"Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos, de acuerdo con lo establecido en el reglamento del presente artículo.

"Tratándose de obligaciones que se originen de la emisión de valores, para efectos de su inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, bastará con que se presente evidencia de dichos valores de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento, en el entendido que dentro de los diez días hábiles siguientes a la inscripción de los mismos, deberá notificarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su circulación o colocación; de lo contrario, se procederá a la cancelación de la inscripción.

"El Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será público a través de la página oficial de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá permitir la identificación del porcentaje total de participaciones federales afectadas por cada entidad y Municipio, así como el destino definido en los instrumentos que formalizan la obligación, en los términos que establezca el reglamento del presente artículo.

"Las entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en términos de este artículo, a través de fideicomisos o vehículos de fuente de pago o garantía, sin perjuicio de los instrumentos y sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso, las entidades federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y empréstitos, y deberán publicar en forma periódica su información y la de sus Municipios con respecto de las obligaciones garantizadas o aquéllas cuya fuente de pago son las participaciones, al menos en la página oficial de Internet del gobierno de la entidad.

"No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.

"El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.

"En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y Municipios."

El artículo 2o.-A de la legislación citada establece la forma en la que los Municipios participarán del rendimiento de las contribuciones. Sobre esto, dicho precepto dispone que los Estados deberán entregar íntegramente a sus Municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal.

Por su parte, el artículo 6o. establece el porcentaje mínimo de las cantidades que correspondan a los Estados y que deberán entregarse a los Municipios derivado del Fondo General de Participaciones. Asimismo, se precisan la fecha y la forma en la que deberán entregarse las participaciones correspondientes, así como las consecuencias en caso de retraso o falta de su pago.

Por otro lado, el artículo 9o. del ordenamiento citado establece que las participaciones que correspondan a los Municipios son inembargables, que

no pueden afectarse a fines específicos ni pueden ser objeto de retención alguna, salvo el caso de que se trate de las correspondientes al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal o los recursos a los que se refiere el artículo 4o.-A[19] de la propia legislación. Además, dispone que, salvo el caso de que las entidades y Municipios cuenten con participaciones suficientes para responder a sus compromisos, las obligaciones de estos últimos deben constar en un registro único de obligaciones y empréstitos. Finalmente, el numeral bajo análisis excluye lo dispuesto en el primer párrafo a las compensaciones que sean consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones. Aunado a ello, se prevé la posibilidad de celebración de convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas entre el Gobierno Federal y el de las entidades federativas que se hayan adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

En términos similares, los artículos 6, fracciones I y II, y 9 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos disponen:

"Artículo 6. A los Municipios de la entidad les corresponde y percibirán ingresos por concepto de las participaciones federales que reciba el Gobierno del Estado, en la proporción que para cada fondo se establece a continuación:

"I. Del Fondo General de Participaciones, el 20% del total;

"II. Del Fondo de Fomento Municipal, el 100%."

"Artículo 9. Las participaciones que corresponden a los Municipios del Estado son inembargables y no estarán sujetas a retención, ni podrán afectarse a fines específicos, salvo para el pago de obligaciones contraídas en los términos de lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación.

---

[19] "Artículo 4o.-A. La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes:
"…
"Los recursos que obtengan las entidades federativas, Municipios y demarcaciones territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del artículo 9o. de esta ley, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda del 25% de los recursos que les correspondan."

"La afectación de participaciones como garantía o fuente de pago de obligaciones contraídas por los Municipios, deberá ser previamente autorizada por el Cabildo y por el Congreso del Estado en términos de lo previsto por la Constitución del Estado y por las Leyes de Deuda Pública y de Contratos de Colaboración Público Privada Estatales.

"La compensación entre el derecho del Municipio a recibir participaciones y las obligaciones que tenga con el Gobierno del Estado o con la Federación por créditos de cualquier naturaleza, sólo podrá llevarse a cabo siempre y cuando exista el acuerdo entre las partes interesadas y operará en los términos de la legislación aplicable."

De los artículos citados se desprende que a los Municipios del Estado de Morelos les corresponde percibir ingresos por concepto de participaciones federales que el Estado reciba del Gobierno Federal. En relación con ello, en las fracciones I y II del artículo 6 se desglosa el porcentaje correspondiente a cada fondo.

Asimismo, el artículo 9 de la legislación local establece que dichas participaciones son inembargables, que no pueden estar sujetas a retención o afectación a algún fin específico, salvo para el pago de las obligaciones a las que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, al que se ha hecho referencia. Por último, se prevé la posibilidad de compensación entre las participaciones de los Municipios y las obligaciones que haya contraído con el Gobierno Local o con la Federación, por concepto de créditos (de cualquier naturaleza), siempre y cuando exista acuerdo entre las partes interesadas y se acaten las disposiciones legales respectivas.

Expuesto lo anterior, de los preceptos transcritos es posible desprender lo siguiente:

1. Las participaciones federales que reciban los Municipios forman parte de su hacienda, las que serán cubiertas en los términos que para su distribución determinen las Legislaturas Locales, mediante disposiciones de carácter general.

2. Los Estados entregarán íntegramente a sus Municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las Legislaturas Locales.

3. La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba y el retraso dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión, para los casos de pago a plazos de contribuciones.

4. Las participaciones que correspondan a las entidades y Municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por aquéllos, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas, a petición de dichas entidades, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, bien sea a favor de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana; asimismo, proceden las compensaciones que se requieran efectuar, cuando sean a consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones, o cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o la Ley de Coordinación Fiscal así lo autorice.

En ese contexto, las participaciones federales previstas en la fracción IV del artículo 115 constitucional, han sido motivo de estudio por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias,[20] en las cuales se ha establecido un cúmulo de garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendentes al fortalecimiento de su autonomía, a saber:

1. Principio de libre administración de la hacienda municipal,[21] cuyo fin es fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Muni-

[20] Entre las que destaca la controversia constitucional 70/2009, promovida por el Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, del Estado de Oaxaca, resuelta por la Primera Sala de esta Suprema Corte el dos de junio de dos mil diez, cuyas consideraciones quedaron reflejadas en la tesis aislada 1a. CXI/2010, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

[21] Son ilustrativas las jurisprudencias P./J. 5/2000 y P./J. 6/2000, de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS. (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."

cipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfagan sus exigencias, sin estar afectados por intereses ajenos que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos a sus necesidades reales, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.

2. Principio de ejercicio directo por parte del Ayuntamiento de los recursos que integran su hacienda pública municipal,[22] implica que todos los recursos de la hacienda municipal deben ejercerse en forma directa por su órgano de gobierno o por quienes ellos autoricen conforme a la ley.

3. Principio de integridad de los recursos municipales,[23] consiste en que los Municipios deben recibir en forma puntual, efectiva y completa, tanto las participaciones, como las aportaciones federales, pues en caso de entregarse extemporáneamente, se genera el pago de los intereses correspondientes.

4. Derecho de los Municipios a percibir las contribuciones[24] (incluyendo las tasas adicionales), establecidas por los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

5. Principio de reserva de fuentes de ingresos municipales,[25] asegura a los Municipios tener disponibles ciertas fuentes de ingreso para atender a sus necesidades y responsabilidades públicas.

---

[22] Jurisprudencia P./J. 12/2005: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS QUE INTEGRAN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL CONTENIDO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

[23] Este criterio quedó reflejado en la tesis P./J. 46/2004, de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."

[24] Jurisprudencia P./J. 53/2002: "HACIENDA MUNICIPAL. LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SE ENCUENTRAN TUTELADAS BAJO EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA, POR LO QUE ESOS RECURSOS PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE A LOS MUNICIPIOS Y NO AL GOBIERNO DEL ESTADO (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 1o., FRACCIÓN I, DE LA 'LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2002' DEL ESTADO DE SONORA)."

[25] Al respecto, el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 15/2006, estableció: "… el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, conforme al cual se aseguran ciertas

6. Facultad de los Ayuntamientos para que, en su ámbito territorial, propongan a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.[26]

7. Facultad de los Municipios para proponer sus leyes de ingresos, las cuales vinculan a las Legislaturas Estatales a emitirlas con una motivación adecuada, en caso de apartarse de la propuesta municipal.[27]

De los mencionados principios constitucionales se pone de relieve que, por lo general, las participaciones federales están sujetas a un régimen de libre administración, cuya disposición y aplicación debe llevarse a cabo, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de los fines públicos de los propios Ayuntamientos.

Lo anterior se corrobora con lo establecido en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, que prohíbe que dichos recursos estén afectos a intereses ajenos o sujetos a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas o por compensaciones, en los términos y condiciones establecidos en el propio ordenamiento federal.

---

fuentes de ingreso a los Municipios para atender al cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas. Dicho principio se infiere de lo dispuesto por el primer párrafo de la fracción IV del artículo 115 constitucional, a lo largo de sus distintos apartados, y en el segundo párrafo.—El citado primer párrafo establece, en síntesis, que la hacienda municipal se integrará con los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los Municipios y con las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan en su favor, entre las cuales deben contarse necesariamente: a) las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; b) las participaciones en recursos federales, y, c) los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Por su parte, el segundo párrafo de la fracción IV prohíbe a la Federación limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), y añade que las leyes estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones; precisa también que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados y de los Municipios, salvo que sean utilizados para fines o propósitos distintos de su objeto público."

[26] Jurisprudencia P./J. 111/2006: "HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN."

[27] Jurisprudencia P./J. 113/2006: "HACIENDA MUNICIPAL. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES."

Sin embargo, pueden existir casos de excepción, en los que resulte válida la afectación de las participaciones federales que les corresponden a los Municipios y, en ese sentido, también este Alto Tribunal ha establecido que puede darse esa posibilidad cuando se destinen a:

1. Pago de obligaciones contraídas por los Municipios, previa autorización de las Legislaturas Locales e inscripción en el registro correspondiente.[28]

2. Por voluntad manifiesta del Municipio de destinarlos a un determinado fin.[29]

En el caso específico, en el Estado de Morelos se autoriza la afectación de las participaciones como garantía o fuente de pago de obligaciones contraídas por los Municipios, previa autorización del Cabildo y del Congreso del Estado.

En el caso concreto, como se ha puesto de manifiesto, el descuento mensual del mes de junio por concepto de participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, deriva del cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por el Municipio actor, al celebrar con el Gobierno del Estado de Morelos, con fecha de catorce de enero de dos mil catorce, el convenio de solicitud, entrega y reembolso de apoyo financiero con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, acuerdo que actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.

---

[28] Criterio que fue reflejado en la jurisprudencia número P./J. 40/2005, de rubro: "PARTICIPACIONES FEDERALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PERMITE SU AFECTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE AUTORIZADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO Y LA OBLIGACIÓN ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO CORRESPONDIENTE."

[29] En ese sentido fueron pronunciadas las sentencias dictadas en: 1) controversia constitucional 13/2005, fallada el veintitrés de abril de dos mil ocho, por unanimidad de cinco votos, en la que se sostuvo que el descuento efectuado al Municipio actor no afectaba su derecho de libre administración hacendaria y autonomía, pues precisamente por el ejercicio de este derecho, suscribió un convenio mediante el cual decidió comprometer y aplicar parte de su hacienda al pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, para cubrir los gastos de aseguramiento de los trabajadores a su servicio; y, 2) controversia constitucional 82/2009, resuelta el diecisiete de febrero de dos mil diez, por unanimidad de cinco votos, en la que se sostuvo que el principio de libre administración hacendaria faculta a los Municipios a determinar si sus recursos por participaciones son destinados a un fin específico, como el de compensar obligaciones de pago en materia de aportaciones y cuotas, en caso de incumplimiento, mediante la firma de un convenio entre el Municipio actor y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Por tanto, el descuento correspondiente al mes de junio de dos mil catorce, que realizó el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, con cargo al anticipo de participaciones por el monto de $193,055.56 (ciento noventa y tres mil cincuenta y cinco pesos 56/100 M.N.), encuentra fundamento en la cláusula tercera del convenio mencionado.[30]

Luego, es infundado el argumento de invalidez formulado por el Municipio actor, en el sentido de que la orden e instrucciones giradas por el demandado para realizar el descuento en las participaciones federales y del Fondo de Fomento Municipal, así como de los intereses, es ilegal, ya que, como se estableció en párrafos anteriores, se actualiza el caso de excepción en las que resulta válida la afectación de las participaciones federales que le corresponden al Municipio, puesto que existió voluntad manifiesta de éste para afectar (llevar a cabo los descuentos), por parte del Poder Ejecutivo del Estado, las participaciones correspondientes.

Por tanto, no existe violación al principio de integridad de los recursos, contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de libre administración de la hacienda municipal, para fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos; de tal manera que, atendiendo a sus necesidades propias y siendo éstos los que de mejor manera y en forma más cercana las conocen, puedan priorizar la aplicación de sus recursos sin que se vean afectados por intereses ajenos o por cuestiones que, por desconocimiento u otra razón, los obligaran a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de sus necesidades reales.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 5/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."[31]

---

[30] Foja 196 del cuaderno de la controversia constitucional.

[31] El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "En términos generales puede considerarse que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administración hacendaria debe entenderse como el régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto en los términos que fijen las leyes y para el cum-

Por tales motivos, la Federación, al transferir a los Municipios los recursos denominados participaciones federales –incluido el Fondo de Fomento Municipal–, debe garantizar a los Municipios su recepción puntual y efectiva, porque la facultad de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos de la que gozan, presupone que deben tener plena certeza acerca de los recursos de que disponen; en caso contrario, se estaría privando a los Municipios de los apoyos necesarios para ejercer sus obligaciones constitucionales.

Máxime que, sobre el particular, este Alto Tribunal ha sustentado que las participaciones federales quedan comprendidas en el régimen de libre administración hacendaria de los Municipios, por lo que la Federación y los Estados no pueden imponer restricción alguna a su libre administración.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 9/2000, de rubro: HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA."[32]

No obstante, atendiendo a que se actualiza un caso de excepción en los términos autorizados, tanto por la Ley de Coordinación Fiscal, como por la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, existe voluntad manifiesta del Municipio actor para afectar por descuento las participaciones federales para cumplir con sus obligaciones de pago.

Finalmente, es necesario precisar que en la presente controversia constitucional, el Convenio de Solicitud, Entrega y Reembolso de Apoyo Financiero celebrado entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo demandado no fue

---

plimiento de sus fines públicos.". Jurisprudencia P./J. 5/2000, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 515, registro digital: 192331.

[32] El texto de la jurisprudencia es el siguiente: "Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.". Jurisprudencia P./J. 9/2000, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XI, febrero de 2000, página 514, registro digital: 192327.

señalado expresamente como acto reclamado ni se cuestionó por vicios propios.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es parcialmente procedente pero infundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional, en los términos precisados en el considerando tercero de esta ejecutoria.

TERCERO.—Se declara la validez del descuento identificado por el mes de junio, en términos del considerando séptimo de esta resolución.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas (ponente), Margarita Beatriz Luna Ramos y presidente Alberto Pérez Dayán.

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión de veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis aislada y de jurisprudencia 1a. CXI/2010, P./J. 6/2000, P./J. 12/2005, P./J. 46/2004, P./J. 53/2002, P./J. 111/2006, P./J. 113/2006 y P./J. 40/2005 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, noviembre de 2010, página 1213; Tomo XI, febrero de 2000, página 514; Tomo XXI, marzo de 2005, página 814; Tomo XIX, junio de 2004, página 883; Tomo XVII, enero de 2003, página 1393; Tomo XXIV, octubre de 2006, páginas 1129 y 1127, y Tomo XXI, mayo de 2005, página 1023, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas el *Semanario Judicial de la Federación*.

Esta obra se terminó de editar el 30 de abril de 2015 y se imprimió y encuadernó en los talleres de Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V., San Lorenzo núm. 244, Col. Paraje San Juan, Delegación Iztapalapa, C.P. 09830, México, D.F. Se utilizaron tipos Gothic 720 Bt y Gothic 720 Lt Bt de 8, 10 y 14 puntos. La edición consta de 1,200 ejemplares impresos en papel bond de 75 grs.

Impreso en México
Printed in Mexico

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La compilación y edición de esta Gaceta estuvieron a cargo
de la Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 17

Tomo II

Abril de 2015

Plenos de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito
y Normativa y Acuerdos Relevantes

México 2015

DIRECTORIO

Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis:

Cielito Bolívar Galindo
Coordinadora

Erika Arellano Hobelsberger
Subdirectora General de Compilación
del Semanario Judicial de la Federación

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Presidente: Ministro Luis María Aguilar Morales

PRIMERA SALA

Presidente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministros José Ramón Cossío Díaz
Jorge Mario Pardo Rebolledo
Olga Sánchez Cordero de García Villegas
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

SEGUNDA SALA

Presidente: Ministro Alberto Pérez Dayán

Ministros José Fernando Franco González Salas
Margarita Beatriz Luna Ramos
Eduardo Medina Mora Icaza
Juan N. Silva Meza

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
D.F.	**3°**	**Presidente**	**RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
D.F.	1°		LUIS NÚÑEZ SANDOVAL
	2°		ROSA GUADALUPE MALVINA CARMONA ROIG
	3°		**RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ**
	4°		HÉCTOR LARA GONZÁLEZ
	5°		HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO
	6°		TERESO RAMOS HERNÁNDEZ
	7°		LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ
	8°		TAISSIA CRUZ PARCERO
	9°		GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
D.F.	**2°**	**Presidenta**	**MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
D.F.	1°		JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA
	2°		**MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN**
	3°		JORGE OJEDA VELÁZQUEZ
	4°		MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ
	5°		MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ
	6°		EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO
	7°		RICARDO OLVERA GARCÍA
	8°		ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA
	9°		SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ
	10°		MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA
	11°		FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ
	12°		EUGENIO REYES CONTRERAS
	13°		JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO
	14°		URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
	15°		CUAUHTÉMOC CARLOCK SÁNCHEZ
	16°		ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU
	17°		AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ
	18°		ADRIANA ESCORZA CARRANZA

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
D.F.	**1°**	**Presidenta**	**MA. DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
D.F.	**1°**		**MA. DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO**
	2°		JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ
	3°		NEÓFITO LÓPEZ RAMOS
	4°		BENITO ALVA ZENTENO
	5°		ELISEO PUGA CERVANTES
	6°		GUSTAVO RAFAEL PARRAO RODRÍGUEZ
	7°		MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO
	8°		ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS
	9°		GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES
	10°		VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO
	11°		FERNANDO RANGEL RAMÍREZ
	12°		FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁZQUEZ
	13°		ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ
	14°		ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
D.F.	**12°**	**Presidente**	**FRANCISCO JAVIER PATIÑO PÉREZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
D.F.	1°		JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO
	2°		ELISA JIMÉNEZ AGUILAR
	3°		SALVADOR CASTRO ZAVALETA
	4°		MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA
	5°		HERLINDA FLORES IRENE
	6°		MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ
	7°		ELÍAS ÁLVAREZ TORRES
	8°		EDNA LORENA HERNÁNDEZ GRANADOS
	9°		RICARDO RIVAS PÉREZ
	10°		RICARDO CASTILLO MUÑOZ
	11°		ARISTEO MARTÍNEZ CRUZ
	12°		**FRANCISCO JAVIER PATIÑO PÉREZ**
	13°		HÉCTOR LANDA RAZO
	14°		SERGIO PALLARES Y LARA
	15°		JUAN ALFONSO PATIÑO CHÁVEZ
	16°		MARÍA EDITH CERVANTES ORTIZ
	17°		ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
D.F.	**1°**	**Presidente**	**ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
D.F.	**1°**		**ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON**
	1°		JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ
	1°		JEAN CLAUDE ANDRE TRON PETIT
	2°		ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS
	2°		FILIBERTO JAVIER MIJANGOS NAVARRO
	2°		ARTURO ITURBE RIVAS

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIAS EN TOLUCA, NAUCALPAN DE JUÁREZ Y CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADOS Y SIN ESPECIALIZAR)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Toluca	**4°**	**Presidente**	**JAVIER CARDOSO CHÁVEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES EN MATERIA PENAL			
Toluca	1°		ANTONIO LEGORRETA SEGUNDO
	2°		ANDRÉS PÉREZ LOZANO
	3°		JOSÉ MERCED PÉREZ RODRÍGUEZ
	4°		HUMBERTO VENANCIO PINEDA
MAGISTRADOS INTEGRANTES EN MATERIA ADMINISTRATIVA			
Naucalpan	1°		JULIA MARÍA DEL CARMEN GARCÍA GONZÁLEZ
	2°		MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO
	3°		IRMA LETICIA FLORES DÍAZ
	4°		YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ
MAGISTRADOS INTEGRANTES EN MATERIA CIVIL			
Toluca	1°		JACINTO JUÁREZ ROSAS
	2°		JUAN CARLOS ORTEGA CASTRO
	3°		ISAIAS ZÁRATE MARTÍNEZ
	4°		**JAVIER CARDOSO CHÁVEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES EN MATERIA DE TRABAJO			
Toluca	1°		WILLY EARL VEGA RAMÍREZ
	2°		NICÓLAS CASTILLO MARTÍNEZ
MAGISTRADOS INTEGRANTES SIN ESPECIALIZAR CD. NEZAHUALCÓYOTL			
Nezahual-cóyotl	1°		DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS
	2°		SONIA ROJAS CASTRO

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN JALISCO TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Zapopan	**3°**	**Presidente**	**JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Zapopan	1°		JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES
	2°		HUGO RICARDO RAMOS CARREÓN
	3°		**JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA**

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN JALISCO TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Zapopan	**3°**	**Presidente**	**ELÍAS HERMENEGILDO BANDA AGUILAR**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Zapopan	1°		ROGELIO CAMARENA CORTÉS
	2°		FILEMÓN HARO SOLÍS
	3°		**ELÍAS HERMENEGILDO BANDA AGUILAR**
	4°		ROBERTO CHARCAS LEÓN
	5°		RENÉ OLVERA GAMBOA

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN JALISCO TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Zapopan	**5°**	**Presidente**	**ENRIQUE DUEÑAS SARABIA**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Zapopan	1°		FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
	2°		GERARDO DOMÍNGUEZ
	3°		GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ
	4°		FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ
	5°		**ENRIQUE DUEÑAS SARABIA**

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN JALISCO TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Zapopan	**1°**	**Presidente**	**JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Zapopan	**1°**		**JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**
	2°		GABRIEL MONTES ALCARÁZ
	3°		JESÚS DE ÁVILA HUERTA
	4°		MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Monterrey	**2°**	**Presidente**	**JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Monterrey	1°		RAMÓN OJEDA HARO
	1°		JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA
	1°		JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GÁMEZ
	2°		**JOSÉ ROBERTO CANTÚ TREVIÑO**
	2°		----------
	2°		FELISA DÍAZ ORDAZ VERA

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Monterrey	**2°**	**Presidente**	**JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Monterrey	1°		ANTONIO CEJA OCHOA
	2°		**JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO**
	3°		MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Monterrey	**3°**	**Presidente**	**PEDRO PABLO HERNÁNDEZ LOBATO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Monterrey	1°		FRANCISCO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ
	2°		AGUSTÍN ARROYO TORRES
	3°		**PEDRO PABLO HERNÁNDEZ LOBATO**

INTEGRACIÓN DEL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Monterrey	**1°**	**Presidente**	**ALFREDO GÓMEZ MOLINA**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Monterrey	**1°**		**ALFREDO GÓMEZ MOLINA**
	2°		ABRAHAM CALDERÓN DÍAZ
	3°		GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ
	4°		JOSÉ LUIS TORRES LAGUNAS

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL QUINTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, SONORA TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Hermosillo	**2°**	**Presidente**	**EVARISTO CORIA MARTÍNEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Hermosillo	1°	PENAL Y ADMVA.	MARIO TORAYA
	2°	PENAL Y ADMVA.	**EVARISTO CORIA MARTÍNEZ**
	3°	PENAL Y ADMVA.	HÉCTOR GUILLERMO MALDONADO MALDONADO
	1°	CIVIL Y TBJO.	ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA
	2°	CIVIL Y TBJO.	ARTURO CASTAÑEDA BONFIL

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN PUEBLA TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
San Andrés Cholula	**1°**	**Presidente**	**ALFONSO GAZCA COSSÍO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
San Andrés Cholula	**1°**		**ALFONSO GAZCA COSSÍO**
	2°		ARTURO MÉJIA PONCE DE LEÓN
	3°		JOSÉ SALVADOR ROBERTO JIMÉNEZ LOZANO

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN PUEBLA TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
San Andrés Cholula	**1°**	**Presidente**	**FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
San Andrés Cholula	**1°**		**FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ**
	2°		MARÍA LEONOR PACHECO FIGUEROA
	3°		JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN PUEBLA TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
San Andrés Cholula	**1°**	**Presidenta**	**ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
San Andrés Cholula	**1°**		**ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO**
	2°		RAÚL ARMANDO PALLARES VALDEZ
	3°		FILIBERTO MÉNDEZ GUTIÉRREZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN PUEBLA TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Puebla	**2°**	**Presidente**	**FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Puebla	1°		SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA
	1°		----------
	1°		GLORIA GARCÍA REYES
	2°		**FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ**
	2°		EMMA HERLINDA VILLAGÓMEZ ORDÓÑEZ
	2°		MIGUEL MENDOZA MONTES

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN VERACRUZ TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Boca del Río	**1°**	**Presidente**	**MARTÍN SOTO ORTIZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Boca del Río	1°		SALVADOR CASTILLO GARRIDO
	1°		----------
	1°		**MARTÍN SOTO ORTIZ**
	2°		JUAN CARLOS MORENO CORREA
	2°		----------
	2°		ANTONIO SOTO MARTÍNEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN VERACRUZ TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Boca del Río	**2°**	**Presidente**	**VÍCTOR HUGO MENDOZA SÁNCHEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Boca del Río	1°		LUIS GARCÍA SEDAS
	1°		ELIEL ENEDINO FITTA GARCÍA
	1°		GRACIELA GUADALUPE ALEJO LUNA
	2°		**VÍCTOR HUGO MENDOZA SÁNCHEZ**
	2°		JOSÉ PÉREZ TRONCOSO
	2°		ANASTACIO MARTÍNEZ GARCÍA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN VERACRUZ TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Xalapa	**1°**	**Presidente**	**CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Xalapa	1°		JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO
	1°		**CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ**
	1°		ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN
	2°		EZEQUIEL NERI OSORIO
	2°		ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDES
	2°		JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN VERACRUZ TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Xalapa	**1°**	**Presidente**	**HUGO ARTURO BAIZÁBAL MALDONADO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Xalapa	1°		MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS
	1°		**HUGO ARTURO BAIZÁBAL MALDONADO**
	1°		MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY
	2°		JORGE TOSS CAPISTRÁN
	2°		JORGE SABASTÍAN MARTÍNEZ GARCÍA
	2°		HÉCTOR RIVEROS CARAZA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL OCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COAHUILA TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Torreón	**2°**	**Presidente**	**FERNANDO OCTAVIO VILLARREAL DELGADO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Torreón	1°	PENAL Y ADMVA.	OCTAVIO BOLAÑOS VALADEZ
	2°	PENAL Y ADMVA.	ALFONSO SOTO MARTÍNEZ
	1°	CIVIL Y TBJO.	CARLOS GABRIEL OLVERA CORRAL
	2°	CIVIL Y TBJO.	**FERNANDO OCTAVIO VILLARREAL DELGADO**
Saltillo		PENAL Y TBJO.	JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ VEGA
		ADMVA. Y CIVIL	GUILLERMO LORETO MARTÍNEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL NOVENO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS POTOSÍ TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
S.L.P.	**2°**	**Presidenta**	**JUANA MARÍA MEZA LÓPEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
S.L.P.	1°		FRANCISCO GUILLERMO BALTAZAR ALVEAR
	2°		**JUANA MARÍA MEZA LÓPEZ**
	3°		JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TABASCO TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Coatzacoalcos		**Presidente**	**MANUEL JUÁREZ MOLINA**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Villahermosa		PENAL Y TBJO.	LAURA SERRANO ALDERETE
		ADMVA. Y TBJO.	EDGAR HUMBERTO MUÑOZ GRAJALES
		CIVIL Y TBJO.	JULIA RAMÍREZ ALVARADO
Coatzacoalcos			**MANUEL JUÁREZ MOLINA**

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOPRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Morelia	**1°**	**Presidente**	**JOSÉ MA. ALVARO NAVARRO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Morelia		PENAL	OMAR LIEVANOS RUIZ
	1°	ADMVA. Y TBJO.	HUGO SAHUER HERNÁNDEZ
	2°	ADMVA. Y TBJO.	GILDARDO GALINZOGA ESPARZA
	1°	CIVIL	**JOSÉ MA. ALVARO NAVARRO**
	2°	CIVIL	J. JESÚS CONTRERAS CORIA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOSEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MAZATLÁN, SINALOA TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Mazatlán	**1°**	**Presidente**	**MARIO GALINDO ARIZMENDI**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Mazatlán	1°		MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ TORRES
	1°		**MARIO GALINDO ARIZMENDI**
	1°		----------
	2°		JESÚS ENRIQUE FLORES GONZÁLEZ
	2°		JOSÉ ELIAS GALLEGOS BENÍTEZ
	2°		JORGE PÉREZ CERÓN

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN OAXACA TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Oaxaca		**Presidente**	**JORGE VALENCIA MÉNDEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Oaxaca		PENAL Y ADMVA.	RODOLFO ALBERTO BANDALA ÁVILA
		CIVIL Y ADMVA.	MARÍA DE FÁTIMA ISABEL SÁMANO HERNÁNDEZ
		TRBJO. Y ADMVA.	**JORGE VALENCIA MÉNDEZ**

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Mérida		**Presidente**	**RAQUEL FLORES GARCÍA**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Mérida		PENAL Y ADMVA.	JORGE ENRIQUE EDEN WYNTER GARCÍA
		CIVIL Y ADMVA.	GABRIEL ALFONSO AYALA QUIÑONES
		TBJO. Y ADMVA.	**RAQUEL FLORES GARCÍA**

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN BAJA CALIFORNIA TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Mexicali	**1°**	**Presidente**	**IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Mexicali	**1°**		**IRINEO LIZÁRRAGA VELARDE**
	2°		ANTONIO REBOLLO TORRES
	3°		MARÍA DEL CARMEN TORRES MEDINA
	4°		JOSÉ LUIS DELGADO GAYTÁN
	5°		FAUSTINO CERVANTES LEÓN
	6°		JOSÉ ÁVALOS COTA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Guanajuato	**2°**	**Presidente**	**JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Guanajuato	1°		ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO
	1°		ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ
	1°		VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO
	2°		**JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ**
	2°		ARTURO HERNÁNDEZ TORRES
	2°		JOSÉ GERARDO MÉNDEZ GUTIÉRREZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Guanajuato	**3°**	**Presidente**	**JOSÉ GUILLERMO ZÁRATE GRANADOS**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Guanajuato	1°		JUAN SOLÓRZANO ZAVALA
	2°		FRANCISCO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
	3°		**JOSÉ GUILLERMO ZÁRATE GRANADOS**

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO TIPO DE PLENO (ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Guanajuato	**1°**	**Presidente**	**JOSÉ JUAN TREJO ORDUÑA**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Guanajuato	**1°**		**JOSÉ JUAN TREJO ORDUÑA**
	1°		GILBERTO DÍAZ ORTIZ
	1°		FRANCISCO GONZÁLEZ CHÁVEZ
	2°		ÁNGEL MICHEL SÁNCHEZ
	2°		----------
	2°		CELESTINO MIRANDA VÁZQUEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CHIHUAHUA TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Juárez		**Presidenta**	**MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Chihuahua	1°	PENAL Y ADMVA.	MARTHA OLIVIA TELLO ACUÑA
	2°	PENAL Y ADMVA.	JOSÉ OCTAVIO RODARTE IBARRA
	1°	CIVIL Y TBJO.	GERARDO TORRES GARCÍA
	2°	CIVIL Y TBJO.	CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA
	3°	CIVIL Y TBJO.	GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES
Juárez			**MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO**

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Cuernavaca	**1°**	**Presidente**	**FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Cuernavaca	**1°**		**FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA**
	2°		ENRIQUE MAGAÑA DÍAZ
	3°		ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ
	4°		JUAN JOSÉ FRANCO LUNA
	5°		ALEJANDRO ALFARO RIVERA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Reynosa	**1°**	**Presidente**	**HÉCTOR GÁLVEZ TÁNCHEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Cd. Victoria	1°	PENAL Y TBJO.	MANUEL BÁRCENA VILLANUEVA
	2°	PENAL Y TBJO.	ABEL ANAYA GARCÍA
	1°	ADMVA. Y CIVIL	GRACIELA MARGARITA LANDA DURÁN
	2°	ADMVA. Y CIVIL	GONZALO HIGINIO CARRILLO DE LEÓN
Reynosa	**1°**		**HÉCTOR GÁLVEZ TÁNCHEZ**
	2°		ARTEMIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Tuxtla Gtz.	**2°**	**Presidente**	**DANIEL SÁNCHEZ MONTALVO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Tuxtla Gtz.	1°		JOSÉ LUIS LEGORRETA GARIBAY
	2°		**DANIEL SÁNCHEZ MONTALVO**
	3°		SUSANA TERESA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
	4°		PABLO QUIÑONES RODRÍGUEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUERRERO TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Chilpancingo	**2°**	**Presidente**	**JOSÉ LUIS GARCÍA VASCO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Acapulco	1°	PENAL Y ADMVA.	XÓCHITL GUIDO GUZMÁN
	2°	PENAL Y ADMVA.	MARCO ANTONIO GUZMÁN GONZÁLEZ
Chilpancingo	1°	CIVIL Y TBJO.	FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA
	2°	CIVIL Y TBJO.	**JOSÉ LUIS GARCÍA VASCO**
	3°	CIVIL Y TBJO.	JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Querétaro	**2°**	**Presidente**	**GERMÁN TENA CAMPERO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Querétaro	1°		MAURICIO BARAJAS VILLA
	2°		**GERMÁN TENA CAMPERO**
	3°		MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ HIDALGO
	4°		JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN TEPIC, NAYARIT TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Tepic	**1°**	**Presidente**	**PEDRO CIPRÉS SALINAS**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Tepic	1°		IVÁN BENIGNO LARIOS VELÁZQUEZ
	1°		**PEDRO CIPRÉS SALINAS**
	1°		RAMÓN MEDINA DE LA TORRE
	2°		GERMÁN MARTÍNEZ CISNEROS
	2°		----------
	2°		HUGO ALEJANDRO BERMÚDEZ MANRIQUE

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Cancún	**2°**	**Presidente**	**ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Cancún	1°		FRANCISCO MIGUEL PADILLA GÓMEZ
	2°		**ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO**
	3°		JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN PACHUCA TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Pachuca	**2°**	**Presidente**	**MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Pachuca	1°		ANIBAL LAFRAGUA CONTRERAS
	1°		FERNANDO HERNÁNDEZ PIÑA
	1°		ELSA HERNÁNDEZ VILLEGAS
	2°		JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ
	2°		GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA
	2°		**MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ**

INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES TIPO DE PLENO (SIN ESPECIALIZACIÓN)			
Sede	**Órgano**	**MAGISTRADO (A) DECANO**	
Aguascalientes	**2°**	**Presidenta**	**LUCILA CASTELÁN RUEDA**
MAGISTRADOS INTEGRANTES			
Aguascalientes	1°		SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO
	1°		JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN
	1°		MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN
	2°		ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO
	2°		ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ
	2°		**LUCILA CASTELÁN RUEDA**

DIRECTORIO DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Luis Núñez Sandoval
Mgdo. Ricardo Paredes Calderón
(A partir del 16 de abril de 2015)
Mgdo. José Luis Villa Jiménez

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig
Mgdo. Alejandro Gómez Sánchez
Mgda. Irma Rivero Ortiz de Alcántara

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Miguel Ángel Medécigo Rodríguez
Mgdo. Ricardo Ojeda Bohórquez
Mgdo. Humberto Manuel Román Franco

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Elvia Díaz de León D'Hers
Mgda. Olga Estrever Escamilla
Mgdo. Héctor Lara González

Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Silvia Carrasco Corona
Mgdo. Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz
Mgdo. Horacio Armando Hernández Orozco

Sexto Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Roberto Lara Hernández
Mgda. María Elena Leguízamo Ferrer
Mgdo. Tereso Ramos Hernández

Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Lilia Mónica López Benítez
Mgdo. Carlos Hugo Luna Ramos
Mgdo. Jorge Fermín Rivera Quintana

Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgda. Taissia Cruz Parcero
Mgdo. José Pablo Pérez Villalba
Mgdo. Carlos Enrique Rueda Dávila

Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Miguel Ángel Aguilar López
Mgda. Guadalupe Olga Mejía Sánchez
Mgda. Emma Meza Fonseca

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Joel Carranco Zúñiga
Mgdo. Julio Humberto Hernández Fonseca
Mgdo. Carlos Ronzon Sevilla

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgda. María Antonieta Azuela Güitrón
Mgdo. Gaspar Paulín Carmona
Mgdo. Humberto Suárez Camacho

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel
Mgdo. Osmar Armando Cruz Quiroz
Mgdo. Jorge Ojeda Velázquez

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgda. María Alejandra de León González
Mgdo. Salvador Mondragón Reyes
Mgdo. Jesús Antonio Nazar Sevilla

Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Pablo Domínguez Peregrina
Mgda. María Elena Rosas López

Sexto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Alfredo Enrique Báez López
Mgda. Clementina Flores Suárez
Mgda. Emma Margarita Guerrero Osio

Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Francisco García Sandoval
Mgdo. Ricardo Olvera García

Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Óscar Fernando Hernández Bautista
Mgda. Ma. Gabriela Rolón Montaño
Mgda. María Guadalupe Saucedo Zavala

Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Edwin Noé García Baeza
Mgdo. José Alejandro Luna Ramos
(A partir del 21 de abril de 2015)
Mgda. María Simona Ramos Ruvalcaba

Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Jorge Arturo Camero Ocampo
Mgda. Martha Llamile Ortiz Brena
Mgdo. Homero Fernando Reed Ornelas

Décimo Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Fernando Andrés Ortiz Cruz
Mgda. Guadalupe Ramírez Chávez

Décimo Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. José Antonio García Guillén
Mgdo. Arturo César Morales Ramírez
Mgdo. Eugenio Reyes Contreras

Décimo Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgda. Luz Cueto Martínez
Mgdo. Rolando González Licona
Mgdo. José Ángel Mandujano Gordillo

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Urbano Martínez Hernández
Mgda. Norma Lucía Piña Hernández

Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Cuauhtémoc Cárlock Sánchez
Mgdo. David Delgadillo Guerrero
Mgdo. Carlos Alfredo Soto Villaseñor

Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Carlos Amado Yáñez
Mgdo. Ernesto Martínez Andreu
Mgda. María Guadalupe Molina Covarrubias

Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Germán Eduardo Baltazar Robles
Mgda. Luz María Díaz Barriga
Mgda. Amanda Roberta García González

Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Armando Cruz Espinosa
Mgdo. Juan Carlos Cruz Razo
Mgda. Adriana Escorza Carranza

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones

Mgdo. Óscar Germán Cendejas Gleason
Mgdo. José Patricio González-Loyola Pérez
Mgdo. Jean Claude Tron Petit

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa Especializado
en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones

Mgda. Adriana Leticia Campuzano Gallegos
Mgdo. Arturo Iturbe Rivas
Mgdo. Filiberto Javier Mijangos Navarro

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. María del Carmen Aurora Arroyo Moreno
Mgdo. Marco Antonio Rodríguez Barajas
Mgdo. Luis Gilberto Vargas Chávez

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. Luz Delfina Abitia Gutiérrez
Mgdo. Jaime Aurelio Serret Álvarez
Mgdo. Alejandro Villagómez Gordillo

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Neófito López Ramos
Mgdo. Víctor Francisco Mota Cienfuegos
Mgdo. Francisco Javier Sandoval López

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. José Leonel Castillo González
Mgdo. Mauro Miguel Reyes Zapata
Mgda. Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo

Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Walter Arellano Hobelsberger
Mgda. María Soledad Hernández Ruiz
Mgdo. Eliseo Puga Cervantes

Sexto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Ismael Hernández Flores
Mgdo. Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti
Mgdo. Gustavo Rafael Parrao Rodríguez

Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Adalberto Eduardo Herrera González
Mgdo. Roberto Ramírez Ruiz
Mgdo. Marco Polo Rosas Baqueiro

Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. José Juan Bracamontes Cuevas
Mgda. María del Refugio González Tamayo
Mgdo. Abraham Sergio Marcos Valdés

Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Gonzalo Arredondo Jiménez
(A partir del 1o. de abril de 2015)
Mgdo. Gonzalo Hernández Cervantes
Mgdo. Virgilio A. Solorio Campos

Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Víctor Hugo Díaz Arellano
Mgdo. J. Jesús Pérez Grimaldi
Mgda. Martha Gabriela Sánchez Alonso

Décimo Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Indalfer Infante Gonzales
Mgdo. Fernando Rangel Ramírez

Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. Ana María Serrano Oseguera
(A partir del 1o. de abril de 2015)
Mgda. Fortunata Florentina Silva Vásquez

Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Mgda. María Concepción Alonso Flores
Mgdo. Daniel Horacio Escudero Contreras
Mgdo. Arturo Ramírez Sánchez

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

Mgdo. Benito Alva Zenteno
Mgdo. Carlos Arellano Hobelsberger
Mgdo. Alejandro Sánchez López

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgda. María de Lourdes Juárez Sierra
Mgdo. Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso

Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Casimiro Barrón Torres
Mgdo. J. Refugio Gallegos Baeza
Mgda. Elisa Jiménez Aguilar

Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. José Luis Caballero Rodríguez
Mgdo. Salvador Castro Zavaleta
Mgda. Lourdes Minerva Cifuentes Bazán

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Víctor Ernesto Maldonado Lara
Mgda. María Eugenia Olascuaga García
Mgda. Idalia Peña Cristo

Quinto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgda. Herlinda Flores Irene
Mgdo. Antonio Rebollo Torres
Mgdo. Roberto Ruiz Martínez

Sexto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Marco Antonio Bello Sánchez
Mgda. Carolina Pichardo Blake
Mgdo. Genaro Rivera

Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Elías Álvarez Torres
Mgdo. José Sánchez Moyaho
Mgdo. Jorge Villalpando Bravo

Octavo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Jorge Farrera Villalobos
Mgda. Edna Lorena Hernández Granados

Noveno Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Adolfo O. Aragón Mendía
Mgdo. Emilio González Santander
Mgdo. Ricardo Rivas Pérez

Décimo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Ricardo Castillo Muñoz
Mgdo. Noé Herrera Perea

Décimo Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Aristeo Martínez Cruz
Mgdo. Ángel Ponce Peña
Mgda. María Soledad Rodríguez González

Décimo Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Felipe Eduardo Aguilar Rosete
Mgdo. Francisco Javier Patiño Pérez

Décimo Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. José Manuel Hernández Saldaña
Mgdo. Héctor Landa Razo
Mgda. María del Rosario Mota Cienfuegos

Décimo Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Tarsicio Aguilera Troncoso
Mgda. Rosa María Galván Zárate
Mgdo. Sergio Pallares y Lara

Décimo Quinto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgdo. Juan Manuel Alcántara Moreno
Mgdo. José Guerrero Láscares
Mgdo. Juan Alfonso Patiño Chávez

Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgda. María Edith Cervantes Ortiz
Mgdo. J. Jesús Gutiérrez Legorreta
Mgdo. Héctor Arturo Mercado López

Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

Mgda. Guadalupe Madrigal Bueno
Mgda. Alicia Rodríguez Cruz
Mgdo. Andrés Sánchez Bernal

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región

Mgdo. César Thomé González
Mgda. Andrea Zambrana Castañeda

Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región

Mgdo. Luis Almazán Barrera
Mgdo. José Alberto Arriaga Farías
Mgdo. Sergio Urzúa Hernández
(A partir del 21 de abril de 2015)

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Antonio Legorreta Segundo
Mgdo. Rubén Arturo Sánchez Valencia
Mgdo. Mauricio Torres Martínez

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Óscar Espinosa Durán
Mgdo. José Nieves Luna Castro
Mgdo. Andrés Pérez Lozano

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgda. Selina Haidé Avante Juárez
Mgdo. Juan Pedro Contreras Navarro
(A partir del 16 de abril de 2015)
Mgdo. José Merced Pérez Rodríguez

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Darío Carlos Contreras Reyes
Mgda. Olga María Josefina Ojeda Arellano
Mgdo. Humberto Venancio Pineda

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgdo. Antonio Campuzano Rodríguez
Mgda. Julia María del Carmen García González
Mgdo. Jacob Troncoso Ávila

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgdo. Tito Contreras Pastrana
Mgdo. Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz
Mgda. Mónica Alejandra Soto Bueno

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgda. Irma Leticia Flores Díaz
Mgdo. Salvador González Baltierra
Mgdo. Víctor Manuel Méndez Cortés

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgda. Guillermina Coutiño Mata
Mgda. Yolanda Islas Hernández

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Diógenes Cruz Figueroa
Mgdo. Jacinto Juárez Rosas
Mgdo. Ricardo Romero Vázquez

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Noé Adonai Martínez Berman
Mgdo. Juan Carlos Ortega Castro
Mgdo. José Antonio Rodríguez Rodríguez

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Felipe Alfredo Fuentes Barrera
Mgdo. Juan Manuel Vega Sánchez
Mgdo. Isaías Zárate Martínez

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Javier Cardoso Chávez
Mgdo. José Martínez Guzmán
Mgdo. Fernando Sánchez Calderón

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Arturo García Torres
Mgdo. Alejandro Sosa Ortiz
Mgdo. Willy Earl Vega Ramírez

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Segundo Circuito

Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Nicolás Castillo Martínez
Mgdo. José Luis Guzmán Barrera
Mgdo. Enrique Munguía Padilla

Primer Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito

Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de Méx.
Mgdo. Froylán Borges Aranda
Mgdo. Miguel Enrique Sánchez Frías
Mgdo. Jorge Arturo Sánchez Jiménez

Segundo Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito

Cd. Nezahualcóyotl, Edo. de Méx.
Mgdo. Fernando Alberto Casasola Mendoza
Mgda. Sonia Rojas Castro
Mgdo. Miguel Ángel Zelonka Vela

Séptimo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Primera Región

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgda. Carolina Isabel Alcalá Valenzuela
Mgdo. Marco Antonio Cepeda Anaya
Mgdo. Erico Torres Miranda

Octavo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Primera Región

Naucalpan, Edo. de Méx.
Mgdo. Hugo Guzmán López
Mgdo. Roberto Rodríguez Maldonado

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. José Félix Dávalos Dávalos
Mgdo. José Guadalupe Hernández Torres
Mgda. Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. José Luis González
Mgdo. Hugo Ricardo Ramos Carreón
Mgdo. Óscar Vázquez Marín

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Mario Alberto Flores García
Mgdo. José Alfredo Gutiérrez Barba
Mgdo. Adalberto Maldonado Trenado

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Rogelio Camarena Cortés
Mgdo. Jaime Crisanto Ramos Carreón

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Tomás Gómez Verónica
Mgdo. Filemón Haro Solís
Mgdo. Enrique Rodríguez Olmedo

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Elías Hermenegildo Banda Aguilar
Mgdo. Hugo Gómez Ávila
Mgdo. José Manuel Mojica Hernández

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Juan Bonilla Pizano
Mgdo. Roberto Charcas León
Mgdo. Martín Ángel Rubio Padilla
(A partir del 16 de abril de 2015)

Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Jorge Héctor Cortés Ortiz
Mgdo. René Olvera Gamboa
Mgdo. Juan José Rosales Sánchez

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Francisco José Domínguez Ramírez
Mgdo. Carlos Arturo González Zárate
Mgda. Martha Leticia Muro Arellano

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Gerardo Domínguez
Mgdo. Víctor Manuel Flores Jiménez
Mgdo. Víctor Jáuregui Quintero

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Gustavo Alcaraz Núñez
Mgdo. Arturo Barocio Villalobos
Mgdo. Guillermo David Vázquez Ortiz

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Jaime Julio López Beltrán
Mgdo. Eduardo Francisco Núñez Gaytán
Mgdo. Francisco Javier Villegas Hernández

Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgda. Alicia Guadalupe Cabral Parra
Mgdo. Enrique Dueñas Sarabia

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Arturo Cedillo Orozco
Mgda. Alfonsina Berta Navarro Hidalgo
Mgdo. José de Jesús Rodríguez Martínez

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Fernando Cotero Bernal
Mgdo. Gabriel Montes Alcaraz
Mgdo. Antonio Valdivia Hernández

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Rodolfo Castro León
Mgdo. Jesús de Ávila Huerta
Mgdo. Alejandro López Bravo

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito

Zapopan, Jal.
Mgdo. Miguel Lobato Martínez
Mgdo. José de Jesús López Arias
Mgdo. Armando Ernesto Pérez Hurtado

Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
Mgdo. Mario Alberto Domínguez Trejo
Mgda. Griselda Guadalupe Guzmán López
Mgdo. Óscar Naranjo Ahumada

Cuarto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
Mgda. Claudia Mavel Curiel López
Mgdo. Moisés Muñoz Padilla
Mgdo. Juan Manuel Rochín Guevara

Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
Mgdo. Rodolfo Munguía Rojas
Mgdo. Francisco Olmos Avilés
Mgdo. Julio Ramos Salas

Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región

Guadalajara, Jal.
Mgdo. José de Jesús Bañales Sánchez
Mgda. Silvia Rocío Pérez Alvarado
Mgda. Elba Sánchez Pozos

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Ramón Ojeda Haro
Mgdo. José Heriberto Pérez García
Mgdo. Juan Manuel Rodríguez Gámez

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. José Roberto Cantú Treviño
Mgda. Felisa Díaz Ordaz Vera

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Sergio Eduardo Alvarado Puente
Mgdo. Antonio Ceja Ochoa
Mgdo. Sergio Javier Coss Ramos

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. José Elías Gallegos Benítez
Mgdo. Luis Alfonso Hernández Núñez
Mgdo. José Carlos Rodríguez Navarro

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Miguel Ángel Cantú Cisneros
Mgdo. Jorge Meza Pérez
Mgdo. Jesús Rodolfo Sandoval Pinzón

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Francisco Eduardo Flores Sánchez
Mgdo. Arturo Ramírez Pérez

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Agustín Arroyo Torres
Mgdo. Martín Alejandro Cañizales Esparza
Mgdo. José Gabriel Clemente Rodríguez

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Carlos Manuel Bautista Soto
Mgdo. Pedro Pablo Hernández Lobato
Mgdo. J. Refugio Ortega Marín

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Sergio García Méndez
Mgdo. Alfredo Gómez Molina
Mgdo. José de Jesús Ortega de la Peña

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Alejandro Alberto Albores Castañón
Mgdo. Abraham Calderón Díaz
Mgdo. Guillermo Vázquez Martínez

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgda. María Isabel González Rodríguez
Mgdo. Guillermo Erik Silva González

Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito

Monterrey, N.L.
Mgdo. Víctor Pedro Navarro Zárate
Mgdo. José Luis Torres Lagunas

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Francisco Domínguez Castelo
Mgdo. Juan Manuel García Figueroa
Mgdo. Mario Toraya

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Evaristo Coria Martínez
Mgdo. Federico Rodríguez Celis
Mgdo. Óscar Javier Sánchez Martínez

Tercer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. José Manuel Blanco Quihuis
Mgdo. Héctor Guillermo Maldonado Maldonado
Mgdo. Juan Carlos Moreno López

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Mario Pedroza Carbajal
Mgda. Armida Elena Rodríguez Celaya

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Quinto Circuito

Hermosillo, Son.
Mgdo. Arturo Castañeda Bonfil
Mgdo. David Solís Pérez

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Alfonso Gazca Cossío
Mgdo. José Manuel Torres Pérez
Mgdo. José Manuel Vélez Barajas

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. José Mario Machorro Castillo
Mgdo. Arturo Mejía Ponce de León
Mgdo. Jesús Rafael Aragón

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Lino Camacho Fuentes
Mgdo. José Salvador Roberto Jiménez Lozano
Mgdo. Armando Mata Morales

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Francisco Javier Cárdenas Ramírez
Mgdo. Jorge Higuera Corona
Mgdo. José Eduardo Téllez Espinoza

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. José Francisco Cilia López
Mgdo. José Ybraín Hernández Lima
Mgda. María Leonor Pacheco Figueroa

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Jaime Raúl Oropeza García
Mgdo. Miguel Ángel Ramírez González
Mgdo. Manuel Rojas Fonseca

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Eric Roberto Santos Partido
Mgda. Rosa María Temblador Vidrio
Mgdo. Enrique Zayas Roldán

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Gustavo Calvillo Rangel
Mgdo. Raúl Armando Pallares Valdez
Mgda. María Elisa Tejada Hernández

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgda. Norma Fiallega Sánchez
Mgdo. Filiberto Méndez Gutiérrez
Mgda. Teresa Munguía Sánchez

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Sexto Circuito

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Samuel Alvarado Echavarría
Mgda. Gloria García Reyes
Mgda. Livia Lizbeth Larumbe Radilla

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Sexto Circuito

Puebla, Pue.
Mgdo. Francisco Esteban González Chávez
Mgdo. Miguel Mendoza Montes
Mgda. Emma Herlinda Villagómez Ordóñez

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Segunda Región

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Eugenio Gustavo Núñez Rivera
Mgdo. Roberto Obando Pérez
Mgdo. Rafael Quiroz Soria

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Segunda Región

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. Alejandro de Jesús Baltazar Robles
Mgdo. Tarcicio Obregón Lemus
Mgdo. Lázaro Franco Robles Espinoza

Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Segunda Región

San Andrés Cholula, Pue.
Mgdo. José Luis Moya Flores
Mgda. Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara
Mgdo. Luis Manuel Villa Gutiérrez

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Séptimo Circuito

Boca del Río, Ver.
Mgdo. Salvador Castillo Garrido
Mgdo. Martín Soto Ortiz

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Séptimo Circuito

Boca del Río, Ver.
Mgdo. Arturo Gómez Ochoa
Mgdo. Juan Carlos Moreno Correa
Mgdo. Antonio Soto Martínez

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Boca del Río, Ver.
Mgda. Graciela Guadalupe Alejo Luna
Mgdo. Eliel E. Fitta García
Mgdo. Luis García Sedas

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Séptimo Circuito

Boca del Río, Ver.
Mgdo. Anastacio Martínez García
Mgdo. Víctor Hugo Mendoza Sánchez
Mgdo. José Pérez Troncoso

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
Mgdo. Clemente Gerardo Ochoa Cantú
Mgdo. Alfredo Sánchez Castelán
Mgdo. José Luis Vázquez Camacho

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
Mgdo. Isidro Pedro Alcántara Valdés
Mgdo. José Manuel de Alba de Alba
Mgdo. Ezequiel Neri Osorio

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
Mgdo. Hugo Arturo Baizábal Maldonado
Mgdo. Martín Jesús García Monroy
Mgda. María Isabel Rodríguez Gallegos

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

Xalapa, Ver.
Mgdo. Jorge Sebastián Martínez García
Mgdo. Jorge Toss Capistrán

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Cuarta Región

Xalapa, Ver.
Mgda. María Cristina Pardo Vizcaíno
Mgdo. Agustín Romero Montalvo
Mgda. Sofía Virgen Avendaño

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Cuarta Región

Xalapa, Ver.
Mgdo. Adrián Avendaño Constantino
Mgdo. Roberto Castillo Garrido
Mgda. María Elena Suárez Préstamo

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgdo. Marco Antonio Arroyo Montero
Mgdo. Octavio Bolaños Valadez
Mgdo. Enrique Chávez Peñaloza

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgdo. Pedro Fernando Reyes Colín
Mgdo. Alfonso Soto Martínez

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo
del Octavo Circuito

Saltillo, Coah.
Mgdo. Santiago Gallardo Lerma
Mgdo. Carlos Alberto López Del Río
Mgdo. José Javier Martínez Vega

Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y Civil
del Octavo Circuito

Saltillo, Coah.
Mgdo. Daniel Cabello González
Mgdo. Fernando Estrada Vásquez
Mgdo. Guillermo Loreto Martínez

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgda. Arcelia de la Cruz Lugo
Mgdo. Juan Carlos Ríos López
(A partir del 16 de abril de 2015)

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Octavo Circuito

Torreón, Coah.
Mgdo. Carlos Gabriel Olvera Corral
(A partir del 16 de abril de 2015)
Mgdo. René Silva de los Santos
(A partir del 16 de abril de 2015)
Mgdo. Fernando Octavio Villarreal Delgado

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región

Saltillo, Coah.
Mgda. Angelina Espino Zapata
Mgdo. Manuel Eduardo Facundo Gaona
Mgdo. Víctor Antonio Pescador Cano

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región

Saltillo, Coah.
Mgdo. David Próspero Cardoso Hermosillo
Mgdo. Sergio Ibarra Valencia
Mgdo. Francisco Javier Rocca Valdez

Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región

Saltillo, Coah.
Mgdo. Gerardo Octavio García Ramos
Mgdo. Edgar Gaytán Galván
Mgdo. Roberto Rodríguez Soto

Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región

Saltillo, Coah.
Mgdo. Ricardo Alejandro González Salazar
Mgdo. Pedro Guillermo Siller González Pico

Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito

San Luis Potosí, S.L.P.
Mgdo. Francisco Guillermo Baltazar Alvear
Mgdo. Carlos Luis Chowell Zepeda
Mgdo. José Luis Sierra López

Segundo Tribunal Colegiado
del Noveno Circuito

San Luis Potosí, S.L.P.
Mgdo. Enrique Alberto Durán Martínez
Mgda. Juana María Meza López
Mgdo. Pedro Elías Soto Lara

Tercer Tribunal Colegiado
del Noveno Circuito

San Luis Potosí, S.L.P.
Mgdo. Guillermo Cruz García
Mgdo. José Ángel Hernández Huizar
Mgda. Dalila Quero Juárez

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo
del Décimo Circuito

Villahermosa, Tab.
Mgda. Josefina del Carmen Mora Dorantes
Mgda. Laura Serrano Alderete

Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo
del Décimo Circuito

Villahermosa, Tab.
Mgdo. Salvador Fernández León
Mgdo. Edgar Humberto Muñoz Grajales

Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Décimo Circuito

Villahermosa, Tab.
Mgdo. Roberto Alejandro Navarro Suárez
Mgda. Julia Ramírez Alvarado

Tribunal Colegiado
del Décimo Circuito

Coatzacoalcos, Ver.
Mgdo. Manuel Juárez Molina
Mgda. Rosa Iliana Noriega Pérez

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Décima Primera Región

Coatzacoalcos, Ver.
Mgda. Mirza Estela Be Herrera
Mgdo. Vicente Mariche de la Garza
Mgdo. Lorenzo Palma Hidalgo

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Décima Primera Región

Coatzacoalcos, Ver.
Mgdo. José Encarnación Aguilar Moya
Mgdo. José Luis Gómez Martínez
Mgdo. Martín Ubaldo Mariscal Rojas

Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. Omar Liévanos Ruiz
Mgdo. Gilberto Romero Guzmán
Mgdo. Carlos Alberto Zerpa Durán

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo
del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. Víctorino Rojas Rivera
Mgdo. Hugo Sahuer Hernández

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo
del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. Gildardo Galinzoga Esparza
Mgdo. Óscar Hernández Peraza
Mgdo. Fernando López Tovar

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. José María Álvaro Navarro
Mgdo. Héctor Federico Gutiérrez de Velasco Romo
Mgda. Patricia Mújica López

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Décimo Primer Circuito

Morelia, Mich.
Mgdo. J. Jesús Contreras Coria
Mgdo. Guillermo Esparza Alfaro
Mgdo. Juan García Orozco

Sexto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Tercera Región

Morelia, Mich.
Mgda. Martha Cruz González
Mgdo. Moisés Duarte Briz
Mgdo. José Valle Hernández

Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Eucebio Ávila López
Mgdo. Martín Guerrero Aguilar
Mgdo. Alfredo López Cruz

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Mario Galindo Arizmendi
Mgdo. Miguel Ángel Rodríguez Torres

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Jesús Enrique Flores González
Mgdo. Jorge Pérez Cerón

Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Luis Rubén Baltazar Aceves
Mgda. Ramona Manuela Campos Sauceda

Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito

Mazatlán, Sin.
Mgdo. Gabriel Fernández Martínez
Mgdo. Juan Guillermo Silva Rodríguez

Primer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
Mgdo. Pedro Gámiz Suárez
Mgdo. Gabriela Guadalupe Huízar Flores
Mgdo. Marco Antonio Peña Sanabria

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
Mgdo. José Manuel Quintero Montes
Mgdo. Miguel Ángel Velarde Ramírez

Tercer Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Quinta Región

Culiacán, Sin.
Mgdo. Ricardo Guevara Jiménez
Mgdo. Jaime Uriel Torres Hernández

Cuarto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Quinta Región

Los Mochis, Sin.
Mgdo. Edmundo Adame Pérez
Mgdo. José Daniel Nogueira Ruiz

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Décimo Tercer Circuito

Oaxaca, Oax.
Mgdo. Rodolfo Alberto Bandala Ávila
Mgdo. Marcos García José

Tribunal Colegiado
en Materias Civil y Administrativa
del Décimo Tercer Circuito

Oaxaca, Oax.
Mgdo. Jorge Alberto González Álvarez
Mgdo. Roberto Meixueiro Hernández
Mgda. María de Fátima Isabel Sámano Hernández

Tribunal Colegiado
en Materias de Trabajo y Administrativa
del Décimo Tercer Circuito

Oaxaca, Oax.
Mgdo. Jaime Allier Campuzano
Mgdo. Roberto Gómez Argüello
Mgdo. Jorge Valencia Méndez

Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Décimo Cuarto Circuito

Mérida, Yuc.
Mgda. Luisa García Romero
Mgdo. Pablo Jesús Hernández Moreno
Mgdo. Jorge Enrique Eden Wynter García

Tribunal Colegiado
en Materias Civil y Administrativa
del Décimo Cuarto Circuito

Mérida, Yuc.
Mgdo. Gabriel Alfonso Ayala Quiñones
Mgdo. Luis Armando Cortés Escalante

Tribunal Colegiado
en Materias de Trabajo y Administrativa
del Décimo Cuarto Circuito

Mérida, Yuc.
Mgdo. Fernando Amorós Izaguirre
Mgda. Raquel Flores García
Mgdo. Paulino López Millán

Segundo Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Octava Región

Mérida, Yuc.
Mgdo. José Atanacio Alpuche Marrufo
Mgdo. Gonzalo Eolo Durán Molina
Mgda. Mayra González Solís

Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. Irineo Lizárraga Velarde
Mgda. Isabel Iliana Reyes Muñiz
Mgdo. Jorge Salazar Cadena

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgda. Graciela Margarita Landa Durán
Mgdo. Jaime Ruiz Rubio

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgda. María del Carmen Torres Medina
Mgdo. Gerardo Manuel Villar Castillo

Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. José Luis Delgado Gaytán
Mgdo. David Napoleón Guerrero Espriú
Mgdo. Salvador Tapia García

Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. Faustino Cervantes León
Mgdo. Inosencio del Prado Morales
Mgdo. Gabriel Alejandro Zúñiga Romero

Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito

Mexicali, B.C.
Mgdo. José Ávalos Cota
Mgdo. José Miguel Trujillo Salceda

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Alberto Augusto de la Rosa Baraibar
Mgdo. Roberto Hoyos Aponte
Mgdo. Jorge Luis Mejía Perea

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Víctor Manuel Estrada Jungo
Mgdo. Ariel Alberto Rojas Caballero
Mgdo. Enrique Villanueva Chávez

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Arturo Hernández Torres
Mgdo. José Gerardo Mendoza Gutiérrez
Mgdo. José de Jesús Quesada Sánchez

Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. José Jorge López Campos
Mgdo. Juan Solórzano Zavala
Mgdo. Jesús Valencia Peña

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Juan Manuel Arredondo Elías
Mgdo. Francisco Martínez Hernández

Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgda. María Patricia Aguilar Alvarado
Mgdo. Javier Pons Liceaga
Mgdo. José Guillermo Zárate Granados

Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Gilberto Díaz Ortiz
Mgdo. Francisco González Chávez
Mgdo. José Juan Trejo Orduña

Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito

Guanajuato, Gto.
Mgdo. Gerardo Martínez Carrillo
Mgdo. Ángel Michel Sánchez
Mgdo. Celestino Miranda Vázquez

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgdo. José Martín Hernández Simental
Mgda. Martha Olivia Tello Acuña

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgdo. Marco Antonio Rivera Corella
Mgdo. José Octavio Rodarte Ibarra
Mgdo. Ángel Gregorio Vázquez González

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgda. María del Carmen Cordero Martínez
Mgdo. Manuel Armando Juárez Morales
Mgdo. Gerardo Torres García

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgdo. Carlos Carmona Gracia
Mgdo. Cuauhtémoc Cuéllar de Luna
Mgdo. José Rigoberto Dueñas Calderón

Tercer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Décimo Séptimo Circuito

Chihuahua, Chih.
Mgdo. Gabriel Ascención Galván Carrizales
Mgdo. Luis Ignacio Rosas González

Tribunal Colegiado
del Décimo Séptimo Circuito

Cd. Juárez, Chih.
Mgdo. Juan Gabriel Sánchez Iriarte
Mgda. María Teresa Zambrano Calero

Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Mario Roberto Cantú Barajas
Mgdo. Francisco Paniagua Amézquita

Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Enrique Magaña Díaz
Mgdo. Nicolás Nazar Sevilla

Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Guillermo del Castillo Vélez
Mgda. Ana Luisa Mendoza Vázquez
Mgdo. Alejandro Roldán Velázquez

Cuarto Tribunal Colegiado
del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Juan José Franco Luna
Mgdo. José Ángel Máttar Oliva
Mgdo. Ricardo Ramírez Alvarado

Quinto Tribunal Colegiado
del Décimo Octavo Circuito

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Alejandro Alfaro Rivera
Mgdo. Ricardo Domínguez Carrillo
Mgdo. Justino Gallegos Escobar

Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Primera Región

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Rigoberto Baca López
Mgdo. Juan Pablo Bonifaz Escobar
Mgdo. Everardo Orbe de la O

Sexto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Primera Región

Cuernavaca, Mor.
Mgdo. Juan Moreno Miramontes
Mgda. Irma Rodríguez Franco

Noveno Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Primera Región

Cuernavaca, Mor.
Mgda. Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez
Mgdo. Alejandro Javier Hernández Loera
Mgdo. Luis Vega Ramírez

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo
del Décimo Noveno Circuito

Cd. Victoria, Tamps.
Mgdo. Osbaldo López García
(A partir del 16 de abril de 2015)
Mgdo. Eduardo Torres Carrillo
(A partir del 16 de abril de 2015)

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y de Trabajo
del Décimo Noveno Circuito

Cd. Victoria, Tamps.
Mgdo. Abel Anaya García
Mgda. Olga Iliana Saldaña Durán

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y Civil
del Décimo Noveno Circuito

Cd. Victoria, Tamps.
Mgdo. Guillermo Cuautle Vargas
Mgdo. Eduardo Iván Ortiz Gorbea

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y Civil
del Décimo Noveno Circuito

Cd. Victoria, Tamps.
Mgdo. Gonzalo Higinio Carrillo de León
Mgda. Carla Isselin Talavera

Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Noveno Circuito

Reynosa, Tamps.
Mgdo. Lucio Antonio Castillo González
Mgdo. Héctor Gálvez Tánchez
Mgdo. Carlos Miguel García Treviño

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito

Reynosa, Tamps.
Mgdo. Juan Pablo Hernández Garza
Mgdo. Artemio Hernández González

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Mgdo. José Luis Legorreta Garibay
Mgdo. Miguel Moreno Camacho
Mgdo. Manuel de Jesús Rosales Suárez

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Mgdo. Carlos Arteaga Álvarez
Mgdo. Luis Arturo Palacio Zurita
Mgdo. Daniel Sánchez Montalvo

Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Mgda. Irma Caudillo Peña
Mgdo. J. Martín Rangel Cervantes
Mgda. Susana Teresa Sánchez González

Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Mgdo. Jorge Mason Cal y Mayor
Mgdo. Pablo Quiñones Rodríguez
Mgdo. Héctor Martín Ruiz Palma

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Vigésimo Primer Circuito

Acapulco, Gro.
Mgdo. Gerardo Dávila Gaona
Mgda. Xóchitl Guido Guzmán

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Penal y Administrativa
del Vigésimo Primer Circuito

Acapulco, Gro.
Mgdo. Martiniano Bautista Espinosa
Mgdo. Marco Antonio Guzmán González

Primer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
Mgdo. Fernando Rodríguez Escárcega

Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
Mgdo. José Luis García Vasco
Mgdo. José Morales Contreras

Tercer Tribunal Colegiado
en Materias Civil y de Trabajo
del Vigésimo Primer Circuito

Chilpancingo, Gro.
Mgdo. José Luis Arroyo Alcántar
Mgdo. Jerónimo José Martínez Martínez

Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Séptima Región

Acapulco, Gro.
Mgdo. Jorge Carreón Hurtado
Mgda. Eva Elena Martínez de la Vega
Mgdo. Gustavo Roque Leyva

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgdo. Mauricio Barajas Villa
Mgda. Alma Rosa Díaz Mora
Mgdo. Jorge Mario Montellano Díaz

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgdo. Mario Alberto Adame Nava
Mgdo. Fernando Reza Saldaña
Mgdo. Germán Tena Campero

Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgda. María del Pilar Núñez González
Mgdo. Ramiro Rodríguez Pérez
Mgda. María del Carmen Sánchez Hidalgo

Cuarto Tribunal Colegiado
del Vigésimo Segundo Circuito

Querétaro, Qro.
Mgdo. Carlos Hernández García
Mgdo. Carlos Hinostrosa Rojas
Mgdo. José Luis Mendoza Pérez

Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito

Zacatecas, Zac.
Mgdo. José Benito Banda Martínez
Mgdo. Guillermo Alberto Hernández Segura
Mgdo. Eduardo Antonio Loredo Moreleón

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región

Zacatecas, Zac.
Mgdo. Manuel Cano Máynez
Mgdo. Óscar Mauricio Maycott Morales
Mgdo. Ángel Rodríguez Maldonado

Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región

Zacatecas, Zac.
Mgdo. José Manuel Quistián Espericueta
Mgdo. Serafín Salazar Jiménez

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito

Tepic, Nay.
Mgdo. Pedro Ciprés Salinas
Mgdo. Iván Benigno Larios Velázquez
Mgdo. Ramón Medina de la Torre

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito

Tepic, Nay.
Mgdo. Hugo Alejandro Bermúdez Manrique
Mgdo. Germán Martínez Cisneros

Tribunal Colegiado
del Vigésimo Quinto Circuito

Durango, Dgo.
Mgdo. Miguel Ángel Cruz Hernández
Mgdo. Héctor Flores Guerrero
Mgda. Susana Magdalena González Rodríguez

Tribunal Colegiado
del Vigésimo Sexto Circuito

La Paz, B.C.S.
Mgdo. Alejandro Gracia Gómez
Mgdo. Francisco Javier Rodríguez Huezo

Quinto Tribunal Colegiado
de Circuito del Centro Auxiliar
de la Quinta Región

La Paz, B.C.S.
Mgdo. Enrique Arizpe Rodríguez
Mgda. Edwigis Olivia Rotunno de Santiago

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. Roo.
Mgdo. Rafael Martín Ocampo Pizano
Mgdo. Francisco Miguel Padilla Gómez

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. Roo.
Mgda. Florida López Hernández
Mgdo. Luis Manuel Vera Sosa
Mgdo. Adán Gilberto Villarreal Castro

Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Séptimo Circuito

Cancún, Q. Roo.
Mgdo. Jorge Mercado Mejía
(A partir del 16 de abril de 2015)
Mgdo. Juan Ramón Rodríguez Minaya

Tribunal Colegiado
del Vigésimo Octavo Circuito

Tlaxcala, Tlax.
Mgda. Edith Encarnación Alarcón Meixueiro
Mgdo. Octavio Chávez López
Mgdo. Othón Manuel Ríos Flores

Primer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Noveno Circuito

Pachuca, Hgo.
Mgdo. Fernando Hernández Piña
Mgda. Elsa Hernández Villegas
Mgdo. Aníbal Lafragua Contreras

Segundo Tribunal Colegiado
del Vigésimo Noveno Circuito

Pachuca, Hgo.
Mgdo. Guillermo Arturo Medel García
Mgdo. José Guadalupe Sánchez González
Mgdo. Miguel Vélez Martínez

Primer Tribunal Colegiado
del Trigésimo Circuito

Aguascalientes, Ags.
Mgdo. Miguel Ángel Alvarado Servín
Mgdo. Silverio Rodríguez Carrillo
Mgdo. José Luis Rodríguez Santillán

Segundo Tribunal Colegiado
del Trigésimo Circuito

Aguascalientes, Ags.
Mgdo. Esteban Álvarez Troncoso
Mgda. Lucila Castelán Rueda
Mgdo. Álvaro Ovalle Álvarez

Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito

Campeche, Camp.
Mgdo. David Alberto Barredo Villanueva
Mgdo. Freddy Gabriel Celis Fuentes
Mgdo. Jesús Ortiz Cortez

Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito

Colima, Col.
Mgdo. José David Cisneros Alcaraz
Mgdo. Salvador Murguía Munguía
Mgda. Rosa Elena Rivera Barbosa

Tribunales Unitarios de Circuito

Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito

Mgdo. Manuel Bárcena Villanueva
(A partir del 16 de abril de 2015)

Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito

Mgdo. Benjamín Soto Sánchez
(A partir del 16 de abril de 2015)

Quinto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito

Tijuana, B.C.
Mgdo. Benjamín Castro Hernández
(A partir del 16 de abril de 2015)

Juzgados de Distrito Foráneos

Juzgado Tercero de Distrito
de Procesos Penales Federales
en el Estado de Baja California del Décimo Quinto Circuito

Tijuana, B.C.
Juez María del Socorro López Villarreal
(A partir del 16 de abril de 2015)

Juzgado Primero de Distrito
de Procesos Penales Federales
en el Estado de Nayarit del Vigésimo Cuarto Circuito

El Rincón, Nay.
Juez Jorge Isaac Lagunes Leano
(A partir del 1o. de abril de 2015)

Juzgado Segundo de Distrito
de Procesos Penales Federales
en el Estado de Nayarit del Vigésimo Cuarto Circuito

El Rincón, Nay.
Juez Francisco Javier Montaño Zavala
(A partir del 1o. de abril de 2015)

Juzgado Segundo de Distrito
en el Estado de Durango del Vigésimo Quinto Circuito

Durango, Dgo.
Juez Arístides Marino Santos
(A partir del 23 de abril de 2015)

Juzgado Primero de Distrito
en el Estado de Campeche del Trigésimo Primer Circuito

Campeche, Camp.
Juez Margarita Nahuatt Javier
(A partir del 1o. de abril de 2015)

CUARTA PARTE
PLENOS DE CIRCUITO

SECCIÓN PRIMERA
JURISPRUDENCIA

Subsección 2.
POR CONTRADICCIÓN DE TESIS

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS.

PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 27 DE AGOSTO DE 2014. PONENTE: FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS. SECRETARIO: HUGO REYES RODRÍGUEZ.

Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Pleno del Quinto Circuito correspondiente al veintisiete de agosto de dos mil catorce.

VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—**Denuncia.** Por oficio número 5557, de nueve de septiembre de dos mil trece, recibido en este Pleno del Quinto Circuito el once siguiente, el Magistrado Héctor Guillermo Maldonado Maldonado, entonces presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto

Circuito, denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre el Tribunal Colegiado que presidía, al resolver el amparo administrativo en revisión 381/2012, y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del propio circuito, al fallar el amparo administrativo en revisión número 361/2012.

SEGUNDO.—**Trámite de la denuncia y turno.** Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil trece, el Magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez, en suplencia del presidente del Pleno del Quinto Circuito, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis con el número 3/2013; asimismo, en el propio auto, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes para que enviaran las versiones electrónicas de las ejecutorias en cuestión, a la cuenta de correo electrónico que para tal efecto indicó, y para que informaran si los criterios que sustentaron en las mismas se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Por auto de veinte de septiembre de dos mil trece, se tuvo a los Tribunales Colegiados contendientes remitiendo la información que les fue requerida y se turnaron el expediente y sus anexos al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

El tres de julio de dos mil catorce, la Magistrada Armida Elena Rodríguez Celaya, presidente del Pleno del Quinto Circuito, con vista en el estado procesal que guardaban los autos de este expediente y con motivo de que el veintinueve de enero del año en curso el Magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez dejó de ser integrante del Pleno de este circuito, a fin de regularizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y VII, y 38 del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, que establecen que dicho órgano colegiado podrá acordar el returno de los asuntos, y, además, facultan al presidente del Pleno de Circuito para dictar los trámites que procedan en los asuntos de su competencia, acordó returnar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis al Magistrado Federico Rodríguez Celis, actual presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para la elaboración del proyecto correspondiente.

TERCERO.—**Pedimento.** El agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de confor-

midad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en dicho medio oficial el treinta de mayo del referido año.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, pues fue realizada por el entonces presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

TERCERO.—**Posturas contendientes.** Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 de la Ley de Amparo, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

De la misma manera, ha establecido que por "tesis" debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones, con independencia de que las cuestiones fácticas que rodean esos puntos de derecho no sean exactamente iguales.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee bajo el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DIS-

CREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que

fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."[1]

En el anterior orden de ideas, con la finalidad de establecer y determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Así, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en sesión de trece de diciembre de dos mil doce, al resolver el amparo administrativo en revisión 381/2012,[2] en la parte que interesa, consideró lo que enseguida se transcribe:

"SÉPTIMO.—Los agravios son fundados, en parte, y de estudio innecesario, en otra.

"En efecto, resultan fundados en la parte que el inconforme aduce que ante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con base en el cual se le efectuaba el descuento del diez por ciento de su pensión por concepto de fondo de pensiones, los efectos de la protección constitucional concedida debieron ser que se le devolvieran todas las cantidades que le hubieran sido descontadas por concepto de fondo de pensiones (con base en la aplicación del citado numeral), y no sólo aquellas que se le hubieran efectuado a partir del uno de agosto de dos mil doce, fecha que aparece en el recibo con el cual se acreditó la aplicación del referido artículo.

"Afirmación que sustenta en el hecho de que el artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada; así como en el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, de rubro: 'LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).';

---

[1] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, registro digital 164120.
[2] Fojas 40 a 62.

así como de las diversas P./J. 112/99 y 2a./J. 93/2011, de rubros: 'AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.' e 'INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997.'

"Se sostiene lo anterior pues, como lo afirma, la finalidad de la concesión del amparo es que se restituya al quejoso en el pleno goce de la garantía violada; de tal suerte que si se declara inconstitucional un precepto en virtud del cual se le efectuaba un descuento y no se ordena la devolución de la cantidad total descontada por concepto de la aplicación del mismo, ello se traduce **en una incongruencia** –entre lo pedido por el quejoso en la demanda y lo otorgado en la sentencia– y conlleva a la contravención de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo.

"Es así pues, evidentemente, el quejoso sólo verá reparada la violación actualizada si se le devuelve la totalidad de las cantidades que se le descontaron por concepto de la aplicación del precepto declarado inconstitucionalidad.

"Ahora bien, en el caso, el Juez de Distrito concedió el amparo solicitado, pues consideró inconstitucional el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; luego, es inconcuso que la protección constitucional otorgada, efectivamente, conlleva la devolución de las aportaciones que le hubieran descontado al quejoso de su pensión por el concepto denominado fondo de pensiones, en aplicación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, **a partir del primer acto de aplicación, así como las subsecuentes**.

"Ello, habida cuenta que, al ser inconstitucional la norma de que se trata todo lo actuado con fundamento en ella es inválido y, por ende, debe tenerse presente que sólo de tal modo se le restituye en el goce de la garantía violada al peticionario de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 de la ley de la materia.

"Por tanto, si el Juez ordenó la devolución de esas aportaciones a partir del uno de agosto de dos mil doce, es indudable que aun cuando afirme haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, no lo hizo.

"Lo anterior, toda vez que si bien es verdad que es esa fecha la que aparece en el recibo que exhibió el demandante constitucional **para acreditar la existencia del acto de aplicación**, también lo es que no afirmó que éste fuera el primero de los descuentos efectuados –es decir, el primer acto de aplicación– y, desde luego, no lo fue.

"Cierto, como se advierte de la demanda de amparo, el quejoso refirió:

"'Además de la fecha declarada anteriormente como el primer día que tengo conocimiento del acto reclamado. Deseo precisar, que en mi talón de pago también se exhibe otra fecha y ésta se refiere a la fecha de pago, siendo el primer día del mes (01/08/2012), y ésta es impresa en mi comprobante de pago (talón de cheque) por la responsable Issteson; de igual manera, en este comprobante de pago, se exhibe también una leyenda, que anuncia cuándo se efectuará el próximo pago, siendo estos pagos entre los días 1 al 5 del próximo mes que se trate.

"'De lo expuesto en el párrafo anterior, es mi deseo exponerle C. Juez, que el pago de mis remuneraciones que recibo como pensión, me son depositados en una cuenta bancaria, mismas percepciones que pone la banca a mi disposición entre el día uno y el cinco de cada mes y en lo que quiero ser reiterativo, es en señalar, que mi talón de pago lo recogí el día señalado en el capítulo «V. Fecha de conocimiento del acto reclamado». Esto, debido a que éste se recoge en la instancia «Oficinas centrales del Issteson», ubicado en Blvd. Hidalgo No. 15 Col. Centro en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

"'Señalo lo anterior, para que, al buscar la precisión de la fecha del acto reclamado, no haya confusión entre las fechas que se exhiben en mi talón de pago y la fecha que estoy señalando como el primer día que me entero del acto reclamado.

"'Asimismo, me permito aclararle que el suscrito quejoso sí tenía conocimiento del descuento concepto 83 del talón de cheques que se me entrega como comprobante de pago de mi pensión, mas no que ese descuento del concepto 83 estuviera relacionado de forma alguna con la aplicación del precepto tildado de inconstitucional, ya que en ningún momento se me aclaró dicha relación y en todo momento, la responsable me manejó que el descuento que se me hacía como concepto 83 se trataba de un ahorro como pensionado. Asimismo, le aclaro que mi talón de cheques acredita la existencia del acto que reclamo, mas no se puede acreditar con él la fecha de conocimiento del acto reclamado, ya que no existe relación clara y precisa de uno para con el otro. …'

"El contenido de la transcripción previa pone de manifiesto que si bien el quejoso exhibió el recibo correspondiente al uno de agosto de dos mil doce, **para acreditar la aplicación** del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, **no manifestó que éste fuera el primer acto de aplicación**; más aún, expresamente, afirmó que sí tenía conocimiento de que previamente se le efectuó un descuento por concepto ochenta y tres, pero no del fundamento legal, pues creyó que se trataba de un ahorro como pensionado.

"En ese orden, debe concluirse que el quejoso no señaló que el recibo en mención acreditara el primer acto de aplicación del precepto multicitado y, se reitera, no lo es.

"Afirmación que se vierte, pues el exhaustivo análisis de las constancias del juicio de amparo indirecto permite advertir que a foja sesenta y ocho obra copia certificada de la documental, en la cual, constan las percepciones y deducciones de la pensión otorgada al ahora inconforme en el mes de mayo de dos mil doce, entre las cuales obra el descuento del diez por ciento de la pensión por concepto de fondo de pensión, aunque ahí se identifica con el número treinta y uno.

"De ahí que se concluya que la deducción por concepto de fondo de pensiones se efectuó al quejoso, incluso, desde antes del uno de agosto de dos mil ocho, que es la fecha que aparece en el recibo que exhibió como anexo a la demanda de amparo, para justificar la existencia de un acto concreto de aplicación.

"Luego, no debe confundirse el primer acto de aplicación –real– con aquel que sin ser el primero aplicado fue el primero de cuyo fundamento tuvo conocimiento el quejoso.

"En tal contexto, se impone ordenar la devolución del total de las aportaciones que le fueron descontadas al quejoso por concepto de la aplicación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, a partir del primer acto de aplicación del precepto declarado inconstitucional, así como las subsecuentes.

"Sobre el particular, cabe invocar, por analogía, la jurisprudencia con número de clave 2a./J. 188/2004,[3] de rubro y texto siguientes:

[3] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 470, registro digital 179675.

"'AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.—Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: «LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.», el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido.'."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el uno de febrero de dos mil trece[4] el amparo administrativo en revisión 361/2012, determinó lo siguiente:

"CUARTO.—Son infundados los agravios hechos valer.

"Aduce en ellos la recurrente que interpuso demanda de garantías, señalando como autoridades responsables al Congreso del Estado de Sonora, al gobernador del Estado de Sonora y al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de quienes reclamó la promulgación, aprobación y expedición del decretó que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la ley 38 que regula el funcionamiento del instituto de seguridad antes mencionado, específicamente, el contenido del artículo 60 Bis 'B', y la aplicación en su perjuicio de dicha disposición.

"Refiere también que, entre los antecedentes del acto reclamado, precisó que se le estaba haciendo el descuento del 10 % de su pensión mensual por parte de la responsable, y que no tenía conocimiento que el descuento que aparecía en su talón de pago, correspondía al concepto establecido en el artículo 60 Bis 'B' de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, porque sólo estaba identificado como concepto 83.

---

[4] Fojas 101 a 111, vuelta.

"Menciona que el Juez Tercero de Distrito le concedió la protección constitucional solicitada, acorde a las violaciones evidenciadas en el juicio, sin embargo, al precisar los efectos, '… debió de señalar que se debe restituir al quejoso de todos los derechos o descuentos que se le aplicaron y no desde una fecha específica como lo hace. ...'

"Esto es, que le causa agravio que se decrete que se regrese sólo una parte de los descuentos realizados, contados a partir del uno de agosto de dos mil doce, 'cuando los descuentos realizaron (sic) fueron con aplicación del artículo 60 Bis B de la ley decretada como inconstitucional y no observar lo que dice el artículo 80 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia. …'

"Sostiene que el Juez constitucional omitió señalar que la responsable deje insubsistente todo acto que le haya aplicado y deje de aplicarle el precepto ya señalado y le regrese todo lo que le descontó desde el primer descuento aplicado, que se lo devuelva en una sola exhibición y en un plazo prudente, dado que dichas aportaciones se encuentran estrechamente vinculadas con el precepto declarado inconstitucional, al ser una consecuencia directa e inmediata de la norma.

"Considera, además, que el Juez de Distrito dejó de observar los hechos notorios que se le anexaron a la demanda, donde se les hicieron saber de muchos juicios resueltos por los tres Tribunales Colegiados, donde se dejaron claramente expuestas la argumentación y la interpretación del precepto tildado de inconstitucional, criterios que deben ser obligatorios para el Juez, pero que dejó de observar.

"Las consideraciones que esgrime la quejosa son infundadas.

"Tal como se menciona en las inconformidades, de los autos que informan del acto reclamado en el juicio de garantías, del cual deriva el presente recurso, se conoce que con fecha catorce de agosto del año dos mil doce, la aquí inconforme ********** reclamó el proceso legislativo mediante el cual se aprobó el decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, específicamente el contenido del artículo 60 Bis 'B', en el que se establecía un descuento de fondo de pensiones.

"Al efecto anterior, a fin de demostrar el primer acto de aplicación del contenido de la norma precitada en su perjuicio, la quejosa exhibió copia certificada de la credencial expedida por el instituto de seguridad mencionado,

así como del talón de pago correspondiente a la pensión de fecha uno de agosto de dos mil doce, que contiene la clave de deducciones '83. Fondo de pensiones'.

"Ahora bien, el Juez Tercero de Distrito, al pronunciar la sentencia reclamada, estimó que el contenido del talón de pago exhibido por la actora, correspondiente al mes de agosto de dos mil doce, demostraba el acto de aplicación del numeral tildado de inconstitucional, porque con independencia de que en éste no se mencionara el artículo 60 Bis 'B' del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, atento al contenido al talón de pago que confrontado con el numeral impugnado, se advertía el descuento de una cantidad mensual correspondiente al fondo de pensiones hasta por el 10%, y de las cantidades descontadas aparecía que correspondía, precisamente, al monto o porcentaje previsto en el artículo 60 Bis 'B' precitado, de lo que se estableció que el talón de pago de uno de agosto resultaba eficaz para tener por demostrado el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional.

"También se advierte de la sentencia reclamada, que el estudio hecho por el Juez de amparo concluyó en que la norma cuestionada en el juicio resultaba inconstitucional por contrariar la garantía de equidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción VI, de la Constitución Federal de la República y, atento a ello, '… lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ********** para el efecto de que la autoridad responsable, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, desaplique en beneficio de la quejosa el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, desincorpore de su esfera jurídica la obligación prevista en la norma impugnada, no sólo respecto del acto de aplicación que aquí se combate, sino que en lo futuro, hasta en tanto la misma continúe vigente y, asimismo, le haga devolución de las cantidades descontadas al monto de su pensión por concepto de fondo de pensiones con la clave 83, a partir del acto de aplicación que se vio reflejado en el talón de pago de uno de agosto de dos mil doce; dado que dichas aportaciones se encuentran estrechamente vinculadas con el precepto declarado inconstitucional, al ser una consecuencia directa e inmediata de tal norma. …'

"Atento al sentido y efectos de la concesión del amparo, es inconcuso que contra lo que afirma la recurrente, el Juez de Distrito estableció en forma clara los alcances de la concesión del amparo, precisando, en forma específica, cuál era la actuación que debía seguir la autoridad responsable, a efecto

de restituir al quejoso en el goce de las garantías violadas, tal como lo establece el artículo 80 de la Ley de Amparo, pues al efecto se determinó que debía desincorporarse de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del precepto que se declaró inconstitucional, no sólo respecto al acto de aplicación demostrado sino en lo futuro, hasta en tanto la misma continuara vigente, y se hiciera devolución de las cantidades descontadas por concepto de fondo de pensiones con clave 83, a partir del acto de aplicación que se vio reflejado en el talón de pago correspondiente al mes de agosto de dos mil doce, que exhibió la quejosa, pues tales determinaciones corresponden en forma exacta con las pretensiones externadas por la quejosa, al plantear su demanda de garantías, pues al lograr la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto, implicó que se desincorporara de su esfera jurídica la aplicación del mismo presente y futura, así como que se ordenara que los descuentos que se le habían realizado le fueran devueltos.

"Es cierto que en su demanda de garantías la quejosa mencionó que los descuentos del diez por ciento de su pensión ya se venían realizando y que no fue sino hasta el mes de agosto de dos mil doce, cuando supo que el descuento que se le hacía por concepto 83, correspondía a la aplicación del precepto que se tildó de inconstitucional, sin embargo, debe aclararse que aun cuando una sentencia de amparo que concede la protección constitucional tiene efectos restitutorios, ello no implica que los mismos puedan afectar actos distintos a aquel que dio materia al juicio de garantías y que, en su momento, justificó la oportunidad con la que se promovió la demanda correspondiente, como en el caso fue la demostración del primer acto de aplicación del precepto, mismo que la propia quejosa justificó por medio de su talón de pago correspondiente a su pensión jubilatoria del mes de agosto de dos mil doce.

"Luego, si de la demanda de amparo se advierte que la impetrante de garantías reclama como heteroaplicativa la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico, el artículo 60 Bis 'B', precisando, al efecto, el acto de aplicación por parte de la autoridad responsable ocurrió en el mes de agosto de dos mil doce y a efecto de demostrar tal acto anexó a su demanda el talón de pago correspondiente, entonces, el efecto del amparo, tal como lo consideró el Juez constitucional, no puede ir más allá de la fecha precisada por la propia quejosa.

"Respecto al tema, son aplicables los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros y textos siguientes:

"'Novena Época
"'Registro: 179675
"'Instancia: Segunda Sala

"'Jurisprudencia
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'XXI, enero de 2005
"'Materia: administrativa
"'Tesis: 2a./J. 188/2004
"'Página: 470

"'AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.—Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo I, materia constitucional, página 195, con el rubro: «LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.», el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido.'

"'Novena Época
"'Registro: 194092
"'Instancia: Pleno
"'Tesis aislada
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'IX, abril de 1999
"'Materia: común
"'Tesis: P. XVII/99
"'Página: 34

"''LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.—Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación*, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: «LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.», cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio

de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.'

"'Novena Época
"'Registro: 192846
"'Instancia: Pleno
"'Jurisprudencia
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'X, noviembre de 1999
"'Materias: constitucional, común
"'Tesis: P./J. 112/99
"'Página: 19

"'AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.—El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario,

si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.'

"Ahora, por lo que ve a los plazos y términos en que la autoridad responsable debe dar cumplimiento al fallo protector, estos factores, contra lo que asevera la quejosa en sus inconformidades, no corresponde establecerlos al Juez de Distrito al emitir su sentencia, sino que, en su momento, una vez que el fallo cause estado, se hará el pronunciamiento y prevenciones correspondientes tendentes al fiel y cabal cumplimiento de su fallo, atento a los lineamientos establecidos en el título primero, capítulo XII, de la Ley de Amparo, que concierne precisamente al cumplimiento de las sentencias dictada en los juicios de garantías y, en su caso, la quejosa en el evento de no estar conforme con ello, estará en aptitud de inconformarse mediante las impugnaciones que estime pertinentes.

"Así pues que estos últimos aspectos no se los puede atribuir al Juez de amparo como omisiones que afectan la legalidad del fallo; del mismo modo, tampoco puede estimarse que tal juzgador haya incurrido en alguna omisión por no haber tomado en consideración como hechos notorios los

precedentes citados por la quejosa en su demanda de garantías, en primer lugar, porque la facultad que establece el dispositivo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, es potestativa del juzgador y, por lo mismo, le permite, atento al caso concreto, hacer o no uso de esa facultad, ello, por una parte, y por otra, que lo resuelto tanto por los Jueces de Distrito como por los Tribunales Colegiados de este circuito, no resultan obligatorios para el Juez constitucional, por no reunir las características contempladas en el numeral 193 de la Ley de Amparo, de donde que, lo que menciona la quejosa, tampoco le es reprochable como omisión al juzgado sentenciador.

"Atento a lo anterior, ante lo infundado de los agravios hechos valer, procede confirmar en sus términos la sentencia que se revisa."

CUARTO.—**Existencia de la contradicción.** Conforme a las resoluciones transcritas, en la especie, se actualizan los supuestos esenciales para estimar que existe contradicción de tesis, toda vez que ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre una situación jurídica esencialmente igual, ya que tanto en el juicio de amparo indirecto del que derivó el amparo en revisión administrativo 381/2012, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, como en el amparo en revisión administrativo 361/2012, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos del Quinto Circuito, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora –reclamado con motivo de un acto concreto de aplicación–, con base en el cual, se descontaba a los quejosos el 10% de la cuantía de su pensión mensual, por concepto de fondo de pensiones; en tanto que en los recursos de revisión, al atender el agravio esgrimido contra los efectos del amparo concedido, ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron en forma divergente.

Así, al interponer recurso de revisión contra los fallos dictados en los juicios de amparo indirecto, los quejosos se inconformaron únicamente contra los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, por considerar que la devolución de las cantidades de dinero descontadas de su pensión, correspondiente al 10%, por concepto de fondo de pensiones, debe comprender todas las deducciones efectuadas con motivo de la aplicación del precepto legal declarado inconstitucional, es decir, incluso, las anteriores al acto de aplicación que sirvió de base para la impugnación de la norma general a través del juicio de amparo.

Por un lado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa concluyó que resultaba fundado el agravio, en la parte en que el recu-

rrente adujo que, ante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los efectos de la protección constitucional concedida debían ser para que se le devolvieran todas las cantidades descontadas por concepto de fondo de pensiones, y no sólo aquéllas a partir del uno de agosto de dos mil doce, fecha que aparece en el recibo con el cual se acreditó la aplicación del referido dispositivo legal.

Señaló el Tribunal Colegiado que si bien el quejoso exhibió el recibo correspondiente al uno de agosto de dos mil doce, para acreditar la existencia del acto de aplicación del artículo cuestionado, sin embargo, aquél no manifestó que éste fuera el primero de los descuentos efectuados, y que, desde luego, no lo fue, pues el análisis de las constancias del juicio de amparo indirecto le permitían advertir la existencia de una constancia previa en la que aparecía el descuento del 10% de la pensión, por concepto de fondo de pensión.

Precisó que no debía confundirse el primer acto de aplicación –real– con aquel que, sin ser el primero aplicado, fue el primero de cuyo fundamento tuvo conocimiento el quejoso, por lo que se imponía ordenar la devolución total de las aportaciones que le fueron descontadas al quejoso, por concepto de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a partir del primer acto de aplicación del precepto declarado inconstitucional –anterior al que sirvió de base para la impugnación de la ley–, así como las subsecuentes.

Por su parte, al atender el agravio expuesto en los mismos términos, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa lo declaró infundado, al concluir, en lo conducente, que había estado en lo correcto el Juez de Distrito, al señalar que se hiciera devolución a la quejosa de las cantidades descontadas por concepto de fondo de pensiones con clave 83, sólo a partir del acto de aplicación que se vio reflejado en el talón de pago correspondiente al mes de agosto de dos mil doce, exhibido al intentar la acción de amparo.

También señaló que en la demanda de garantías la quejosa mencionó que los descuentos del 10% de su pensión ya se venían realizando, pero que fue hasta el mes de agosto de dos mil doce cuando supo que el descuento por concepto 83 correspondía a la aplicación del precepto que tildó de inconstitucional, y que aun cuando una sentencia de amparo que concede la protección constitucional tiene efectos restitutorios, ello no implica que los mismos puedan afectar actos distintos de aquel que dio materia al juicio de garantías, y que, en su momento, justificó la oportunidad con la que se promovió la

demanda correspondiente, como en el caso fue la demostración del primer acto de aplicación del precepto, que la propia quejosa justificó por medio del talón de pago correspondiente a su pensión jubilatoria del mes de agosto de dos mil doce.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa concluyó que se reclamó como norma heteroaplicativa el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo del acto de aplicación por parte de la autoridad responsable, que ocurrió en el mes de agosto de dos mil doce y, para demostrarlo, la parte quejosa anexó a la demanda el talón de pago correspondiente; que por lo tanto, como lo consideró el Juez constitucional, el efecto del amparo no podía ir más allá de la fecha precisada por la propia quejosa.

En ese orden de ideas, el punto de contradicción que debe dilucidar este Tribunal Pleno del Quinto Circuito estriba en establecer si, al reclamarse una norma general con motivo de su primer acto de aplicación –en este caso, el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado–, los efectos del amparo concedido deben abarcar o no la restitución de las cantidades retenidas o descontadas con anterioridad al primer acto de aplicación que sirvió de base para impugnar dicho dispositivo legal, como lo concluyó el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, o sólo las cantidades que se dedujeron de la pensión mensual de los quejosos, correspondientes al acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo y subsecuentes, como es el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos de este circuito.

QUINTO.—Criterio que debe prevalecer. Una vez que se dejó establecido en el apartado anterior que sí existe la contradicción de tesis denunciada, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es el que se sustenta en esta ejecutoria.

En principio, se estima pertinente dejar establecido cuál es el sistema de impugnación de normas generales de observancia general, a través del juicio de amparo indirecto, previsto en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, aplicada para resolver los juicios de los que emanan los criterios contendientes.

Los artículos 21, 22, 73, fracciones V, VI y XII, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo en cita establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se impugnan normas de carácter general, atendiendo a

que por su sola entrada en vigor causen un perjuicio –autoaplicativas–, o bien, si requieren de un acto que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida –heteroaplicativas–.

En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin que se requiera ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de intentar la acción constitucional, en un primer momento, dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo; en cambio, cuando se trata de normas generales heteroaplicativas, se requiere un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir de su aplicación, según la regla establecida en el artículo 21 de la citada ley.

De acuerdo con lo anterior, para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo indirecto, se requiere acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección constitucional, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos sean causados con motivo de un acto concreto de aplicación, el cual, puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, en la jurisprudencia número P./J. 55/97, cuya sinopsis es la siguiente:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.—Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia

del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."[5]

De la jurisprudencia transcrita se advierten los criterios que habrán de tomarse en cuenta para dilucidar cuándo una norma general es autoaplicativa y cuándo heteroaplicativa. Así, respecto de las normas generales autoaplicativas, se destaca lo siguiente:

1) Se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por tanto, admiten la procedencia de la acción constitucional en la vía indirecta desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna.

2) Pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computados a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en el artículo 22, fracción I y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 21, en relación con el artículos 73, fracción XII, párrafos segundo y tercero, todos de la Ley de Amparo.

En cambio, por lo que hace a las normas generales heteroaplicativas, procede significar lo que sigue:

---

[5] Publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, registro digital 198200.

1) Se distinguen, porque vinculan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de aplicación.

2) Pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones.

De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general son inevitables desde que entran en vigor; vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia, creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho; nacen con ella misma; no se requiere de la actualización de alguna condición.

En esos términos, tratándose de disposiciones de observancia general, su naturaleza autoaplicativa dependerá de que por sí solas afecten la esfera jurídica de los gobernados, para lo cual, será necesario que aquéllas se refieran a derechos u obligaciones que al momento de su entrada en vigor ya se encuentran en la esfera jurídica de éstos y, por tanto, vinculen al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; serán, entonces, disposiciones de individualización incondicionada.

En el otro supuesto, esto es, tratándose de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador necesitan la ejecución de un acto para situar al particular en la hipótesis legal, es decir, no surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede provenir de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso.

En el supuesto de impugnación de leyes heteroaplicativas, tiene particular relevancia lo dispuesto en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, dado que en dicha porción normativa se distingue entre leyes que por su sola vigencia causan perjuicio al quejoso y aquellas que para que irroguen dicho perjuicio requieren de un acto posterior de aplicación –normas generales heteroaplicativas–.

Cabe señalar que, tratándose de normas generales heteroaplicativas, no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que

el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la disposición en comento, interpretada en forma sistemática o relacionada con la que prevén los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, permite concluir que tal acto de ejecución o individualización de la ley se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación.

En este supuesto, acorde con los criterios que ha sustentado el Alto Tribunal de la Nación en torno a las leyes heteroaplicativas, en todas ellas el primer acto de aplicación se erige como *conditio sine qua non* –condición indispensable– para que proceda la acción de amparo contra la ley que se reclama con motivo de su aplicación concreta en agravio del particular, como se advierte de la tesis de rubro y texto siguientes:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.—En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier 'acto posterior' de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal 'acto posterior' de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como hetero-

aplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente."[6]

Por lo que hace a los efectos de una sentencia que otorga el amparo, éstos son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si ésta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente serle aplicada a la parte quejosa que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva, en relación con el quejoso. Al respecto, tienen aplicabilidad las tesis siguientes:

"LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.—La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada."[7]

"LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA QUE SE PRONUNCIE.—El efecto inmediato de la sentencia protectora contra una ley es nulificar su eficacia jurídica en relación con el quejoso, pues si mediante el examen de los conceptos de violación el órgano de control constitucional la consideró conculcatoria de sus garantías constitucionales

---

[6] Tesis VI/89 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de 1989, página 162, registro digital 205968.

[7] Tesis P. 31 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de 1989, página 228, registro digital 205988.

resolviendo protegerlo y ampararlo, tal resolución es determinante para que deje de tener validez jurídica y vigencia para él, sin que ello quiera decir que la ley pierda sus características de generalidad y obligatoriedad, pues continúa siendo de observancia obligatoria para todos aquellos gobernados que estén colocados en la hipótesis normativa y que no gocen de la protección constitucional. Por vía de consecuencia, si el quejoso solicitó y obtuvo el amparo con motivo del primer acto de aplicación, al estar fundado en ley inconstitucional, ese acto de aplicación adolece del mismo vicio, y ninguna autoridad puede volverle a aplicar la ley que ya se juzgó, dado que las relaciones entre el quejoso y la ley se rigen por la sentencia protectora."[8]

Una vez expuesto lo anterior, se reitera que el aspecto que, en particular, constituye la materia de la presente contradicción de tesis, consiste en dilucidar si, al reclamarse una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, los efectos del amparo concedido deben abarcar o no las cantidades enteradas con anterioridad al acto de aplicación que motivó la promoción del juicio, o bien, sólo las retenidas o descontadas a partir del acto de aplicación invocado en la demanda como el primero para efectos del juicio de amparo.

Los criterios discrepantes, adicionados con las particularidades del caso, implican la determinación de si con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, además del derecho a la restitución de las cantidades deducidas de la pensión que mensualmente percibe la parte quejosa, a partir del acto de aplicación que señaló en la demanda de amparo, también le deben ser restituidas las deducciones anteriores a dicho acto, cuando de otros documentos se advierta que la aplicación del precepto legal fue desde fecha anterior al invocado como el primero para efectos de la impugnación de la norma general, como lo sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, o sólo las deducciones realizadas a partir del primer acto de aplicación que sirvió de base para intentar la acción de amparo, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos de este circuito.

En principio, se estima pertinente dejar establecido cuál fue la litis dilucidada en los juicios de amparo indirecto, de los que derivaron los recursos de revisión de los que conocieron los Tribunales Colegiados contendientes.

---

[8] Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, enero-junio de 1988, página 35, registro digital 206048.

Del contenido de las ejecutorias objeto de análisis, se advierte que en el juicio de amparo indirecto 988/2012, resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, del cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el recurso de revisión 381/2012, al precisar el juzgador los actos reclamados, dejó establecido que éstos consistían en la promulgación, aprobación, expedición y aplicación del artículo 60 Bis B de la ley 38 reformada, en relación con la operación y funcionamiento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual, la autoridad responsable efectuó el descuento del 10%, por concepto de fondo de pensiones, de la pensión que mensualmente percibía la parte quejosa.

El Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, presumió la certeza del acto reclamado al Congreso del Estado de Sonora, al haber omitido rendir su informe justificado, y del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de igual manera, tuvo como cierto el acto reclamado a esta autoridad, consistente en la aplicación de la norma general, con la copia certificada por notario público del recibo de pensión expedido por dicho instituto a favor del quejoso, de fecha uno de agosto de dos mil doce, del cual, advirtió la aplicación del descuento por concepto de fondo de pensiones, previsto en el artículo tildado de inconstitucional.

Una vez hecho el análisis del fondo del asunto, el Juez Tercero de Distrito declaró inconstitucional el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al concluir que resultaba violatorio del principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal y concedió a la parte quejosa el amparo solicitado, para el efecto de que el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora desincorporara de su esfera jurídica la obligación impuesta en la norma declarada inconstitucional, no sólo respecto del acto de aplicación, sino también en lo futuro hasta en tanto dicha norma continuara vigente.

El juzgador también señaló como efectos de fallo protector la obligación de la autoridad ejecutora de restituir al quejoso las cantidades descontadas al monto de su pensión, por concepto de fondo de pensiones con clave 83, a partir del acto de aplicación que se vio reflejado en el talón de pago de uno de agosto de dos mil doce, dado que dicha aportación se encontraba estrechamente vinculada con el precepto declarado inconstitucional, al ser una consecuencia directa e inmediata de tal norma.

En el diverso juicio de amparo indirecto 979/2012, resuelto también por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, del cual correspondió

conocer, en el recurso de revisión 361/2012, al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, se reclamó del Congreso del Estado de Sonora la promulgación, aprobación y expedición del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 38 reformada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, particularmente la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B.

Del gobernador del Estado de Sonora se reclamó la inconstitucionalidad de la autorización, publicación y puesta en vigor en el boletín oficial tomo CLXXV, de la edición especial número 3, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco, en el que se autoriza la aplicación de las reformas, adiciones y derogación de diversas disposiciones de la ley 38 reformada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el que se dispone y norma la aprobación y la autorización de la aplicación del artículo 60 Bis B, y del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la aplicación de dicho precepto legal y que le dejara de aplicar el descuento de su pensión con el concepto 83, correspondiente al fondo de pensiones.

El Juez de Distrito tuvo como acreditado el primer acto de aplicación de la norma general tildada de inconstitucional, con la copia del comprobante de pago correspondiente a la pensión del uno de agosto de dos mil doce, que contiene la clave deducciones 83, por concepto de fondo de pensiones, y precisó que con independencia de que en dicho documento no se mencionaba el artículo reclamado en el juicio de amparo, confrontado éste con el talón de pago, se advertía el descuento de una cantidad mensual correspondiente al fondo de pensiones hasta por el 10%, que correspondía, precisamente, al monto o porcentaje previsto en el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Al resolver el fondo del juicio de amparo, el Juez de Distrito concluyó que la norma cuestionada resultaba inconstitucional, por contrariar la garantía de equidad tributaria, contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal y, atento a ello, concedió a la parte quejosa la protección de la justicia federal, para el efecto de que el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora desaplicara o desincorporara en beneficio de la quejosa la obligación prevista en el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no sólo respecto del acto de aplicación, sino también en lo futuro, hasta en tanto la norma continuara vigente.

Asimismo, para que dicha responsable le hiciera devolución a la parte quejosa de las cantidades descontadas al monto de su pensión, por concepto de fondo de pensiones con la clave 83, a partir del acto de aplicación que se

vio reflejado en el talón de pago de uno de agosto de dos mil doce, al estimar que dichas aportaciones se encontraban estrechamente vinculadas con el precepto declarado inconstitucional, al ser una consecuencia directa e inmediata de tal norma.

De lo reseñado se puede advertir que en ambos juicios de amparo la pretensión de los quejosos consistió en que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ya que con fundamento en dicho precepto legal la responsable ejecutora realizó la deducción del 10% –por concepto de fondo de pensiones– de la cantidad que mensualmente percibían como pensión y, para acreditar lo anterior, exhibieron el talón o comprobante de pago de fecha uno de agosto de dos mil doce.

Como también se puede ver del resumen hecho en el considerando que antecede, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al igual que el Juez de Distrito, sostiene que en el juicio de amparo indirecto se reclamó el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora con motivo del primer acto de aplicación, y que éste quedó acreditado con el recibo o comprobante de pago de uno de agosto de dos mil doce; sin embargo, ante el reclamo de la parte recurrente, en el sentido de que los efectos del amparo deben comprender la restitución a su favor de todos los descuentos a su pensión y no sólo a partir del primer acto de aplicación invocado, al promover el juicio de amparo, el aludido órgano colegiado dejó establecido que si se declaró inconstitucional el precepto legal invocado, al no haberse ordenado la devolución de la cantidad total descontada con motivo de su aplicación, ello se traduce en una incongruencia entre lo pedido en la demanda y lo otorgado en la sentencia, en contravención a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, ya que todo lo actuado con fundamento en ella es inválido.

Para arribar a lo anterior, el aludido órgano jurisdiccional, sin perder de vista que el comprobante o recibo de pago de uno de agosto de dos mil doce, exhibido por la parte quejosa, constituye el primer acto de aplicación de la norma general tildada de inconstitucional para efectos del juicio de amparo, destacó que el impetrante había manifestado en la demanda que no era el primero de los descuentos efectuados, ya que del análisis de las constancias del juicio de amparo indirecto advirtió que obraba copia certificada de la documental en la que constaban las percepciones y deducciones de la pensión otorgada al recurrente, en el mes de mayo de dos mil doce, entre éstas, el descuento del 10% de la pensión por concepto de fondo de pensión, aunque ahí se identificaba con el número treinta y uno.

Con base en lo manifestado en la demanda de amparo y en el documento del mes de mayo de dos mil doce, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa concluyó que la deducción por concepto de fondo de pensiones se efectuó al quejoso, incluso, desde antes del uno de agosto de dos mil doce, fecha que aparecía en el recibo que exhibió para justificar la existencia de un acto concreto de aplicación, al intentar la acción de amparo.

Como se puede advertir de lo que hasta aquí se ha expuesto, la anterior conclusión tiene como basamento que la aplicación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en perjuicio de la parte quejosa, está acreditada desde fecha anterior al acto que ésta invocó como el primero para efectos de la impugnación de la norma general a través del juicio de amparo. Así, desde la óptica del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, se debe distinguir entre el "acto de aplicación real", aludiendo al que cronológicamente tuvo lugar en primer término, que, estimó, lo constituye el que el propio tribunal advirtió del comprobante de pago del mes de mayo de dos mil doce, de otro –uno de agosto de dos mil doce– que, sin ser el primero aplicado, sí fue aquel de cuyo fundamento tuvo conocimiento el quejoso inmediatamente antes de promover el amparo.

Este Tribunal Pleno de Circuito no pierde de vista que en los juicios de amparo los quejosos manifestaron que con anterioridad al uno de agosto de dos mil doce –fecha del comprobante de pago que invocaron para justificar el acto de aplicación–, la autoridad responsable señalada como ejecutora les había hecho descuentos a su pensión por concepto de fondo de pensiones, de los cuales manifestaron que no tenían conocimiento de que correspondieran al precepto legal tildado de inconstitucional; sin embargo, lo cierto es que la pretensión en ambos juicios de amparo consistió en que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, únicamente con base en el comprobante de fecha uno de agosto de dos mil doce, exhibido por los quejosos con las demandas de amparo, precisamente para cumplir con el requisito de procedibilidad de la acción ejercida, esto es, acreditar el perjuicio jurídico causado por el dispositivo legal tildado de inconstitucional y, bajo esa premisa, quedó establecida y fue resuelta la litis constitucional.

Es importante destacar que, con el fin de justificar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo que originó el juicio del que conoció en revisión el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, el quejoso manifestó que la fecha –uno de agosto de dos mil doce– del comprobante de pago exhibido para acreditar el primer acto de aplicación de la

norma reclamada, no debía confundirse con la que manifestó como aquélla –seis de agosto de dos mil doce–, en la que había tenido conocimiento de dicho acto de aplicación, ya que lo anterior corrobora que es el comprobante o talón de pago de la fecha indicada y no otro, el invocado como el primer acto de aplicación que le causaba el perjuicio jurídico para deducir la acción de amparo contra la norma general reclamada; en tanto que la fecha manifestada como aquella en la que tuvo conocimiento de la aplicación del precepto impugnado en ese acto –al acudir a las oficinas del instituto en cuestión a recoger el comprobante de pago de la pensión– fue con el fin de justificar la oportunidad de la demanda de amparo.

En este orden de ideas, no existe duda de que el comprobante o talón de pago de uno de agosto de dos mil doce –de la misma fecha en ambos juicios de amparo– fue exhibido para acreditar el primer acto de aplicación del precepto legal impugnado, para efectos de la promoción del juicio de amparo, en lo que no existe discrepancia entre ambos Tribunales Colegiados; por lo que dicho acto en particular, en la especie, es el que tiene relevancia por dos motivos: el primero, porque al ser el que invocaron los quejosos como el primero del que tuvieron conocimiento que materializó en su perjuicio el precepto legal tildado de inconstitucional, constituye la *conditio sine qua non* –condición indispensable– para que proceda la acción de amparo contra la ley que se reclama con motivo de su aplicación concreta y, el segundo, porque es el punto de referencia para establecer los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional, acorde con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo.

Por lo que hace al primero de los aspectos antes señalados, cuando se controvierte una disposición general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta indispensable que se acredite fehacientemente que la respectiva hipótesis jurídica se concretó expresa o implícitamente en perjuicio del peticionario de garantías, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo o, en su caso, de los diversos escritos presentados durante el juicio por la parte quejosa, sino en todo caso del contenido del acto de aplicación, ya que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto concreto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, pues de lo contrario, se vulneraría el principio de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal.

Lo anterior se puede advertir de las tesis jurisprudenciales y aisladas de rubros siguientes:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO.—El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente."[9]

"INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA.—Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados."[10]

"LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE

---

[9] Tesis P. XCVII/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo II, noviembre de 1995, página 92, registro digital 200276.

[10] Tesis 178, Tercera Sala, *Apéndice* de 1995, Tomo I, Parte SCJN, página 178.

EL JUICIO DE AMPARO.—Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio."[11]

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, IMPUGNACIÓN DE LAS. ES NECESARIO QUE EL ACTO DE SU APLICACIÓN SEA ACTUAL, NO INMINENTE.—Es cierto que el juicio de amparo procede contra actos inminentes, entendiéndose por tales aquellos que necesariamente habrán de presentarse por ser consecuencia de otros ya existentes, pero tratándose de la impugnación de las leyes como heteroaplicativas es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, pues de aceptarse un criterio contrario se permitiría el estudio de la inconstitucionalidad de un ordenamiento que no causa perjuicios con su sola iniciación de vigencia, sin que se hubiera registrado en forma clara y concreta un acto aplicativo a través del cual se actualizaran los perjuicios de la ley, situación técnicamente inadecuada."[12]

"LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ÉSTE DEBE PROBARSE.—De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama."[13]

Se dejó establecido en líneas precedentes que ambos Tribunales Colegiados coinciden en que el primer acto de aplicación de la norma general tildada de inconstitucional, para efectos del juicio de amparo, es el compro-

---

[11] Jurisprudencia 2a./J. 77/97, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 382, registro digital 196954.
[12] Tesis aislada, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Primera Parte, página 28, registro digital 232029.
[13] Tesis aislada, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 79, registro digital 232177.

bante de pago de uno de agosto de dos mil doce; sin embargo, también se destacó que la discrepancia de criterios estriba en el alcance de los efectos del amparo otorgado en ambos juicios, específicamente, por lo que hace a la obligación impuesta a la autoridad responsable señalada como ejecutora, de restituir a la parte quejosa las deducciones que realizó del monto de su pensión mensual, con motivo de la aplicación del precepto legal declarado inconstitucional.

Este Tribunal Pleno de Circuito determina que el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es el que a continuación se dejará establecido, el cual coincide con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, en lo que constituye la materia de la presente contradicción de tesis:

Como se ha mencionado en este considerando, en los juicios de amparo indirecto de los que conocieron en el recurso de revisión los Tribunales Colegiados contendientes, se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el que se establece, literalmente, lo siguiente:

"**Artículo 60 Bis B.** Quienes disfruten una pensión o jubilación del instituto, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual."

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 189/2012, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materias Penal y Administrativa de este circuito, el veinte de junio de dos mil doce, resolvió que la obligación de aportar el porcentaje previsto en el precepto legal transcrito constituye una contribución, al tener la naturaleza jurídica de aportaciones de seguridad social, ya que se encuentra destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para otorgar las pensiones antes indicadas, las cuales son consideradas prestaciones de seguridad social, y que están previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se encuentran sujetas a los principios de justicia fiscal, contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución.

De lo anterior se obtiene que la deducción impuesta a los pensionados en el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado de Sonora es una contribución que se incorpora al patrimonio de dicho instituto, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de ese ordenamiento legal, en cuanto en su fracción II prevé lo siguiente:

"**Artículo 113.** El patrimonio del instituto lo constituirán:

"...

"II. Las aportaciones de los trabajadores y pensionistas en los términos de esta ley."

Por otra parte, en los juicios de amparo quedó acreditado que los quejosos fueron pensionados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y, con tal carácter, promovieron los juicios de amparo, porque estimaban que la aportación impuesta en el precepto legal impugnado transgredía en su perjuicio el principio de equidad tributaria consignado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la hipótesis contributiva contenida en el numeral reclamado resultaba equivalente a la diversa establecida en el artículo 16 del mismo ordenamiento legal y, con ello, se establecía un trato análogo a los contribuyentes que se encuentran en diferentes supuestos de causación, como lo son los trabajadores en activo y los jubilados o pensionados.

Al resolver el fondo de los juicios de amparo, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, porque se concluyó que transgredía el referido principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que tal ley ubica a trabajadores y pensionados en supuestos diversos, el precepto de mérito dispone que estos últimos –los pensionados–, al igual que aquéllos –los trabajadores–, aporten a un fondo de pensión el 10% de su ingreso, esto es, de su pensión mensual, dando un trato igual a sujetos y supuestos que resultan diferentes y, como consecuencia de lo anterior, se otorgó a los quejosos la protección constitucional para el efecto de que el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora desincorporara de la esfera jurídica de los impetrantes la obligación prevista en la norma impugnada, en tanto la misma continuara vigente; asimismo, para que dicha autoridad hiciera la devolución a los quejosos de las cantidades descontadas al monto de su pensión, por concepto de fondo de pensiones con la clave 83, a partir del acto de

aplicación que se vio reflejado en el talón de pago de uno de agosto de dos mil doce, con motivo del cual se instó la acción de amparo.

Por lo que hace a los efectos restitutorios establecidos en la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal Colegiado que resolvió el recurso de revisión 381/2012, no resultan incongruentes con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:

"**Artículo 80.** La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."

Como se puede advertir de la anterior transcripción, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como en la especie lo es el acto de la autoridad responsable director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, consistente en la deducción del 10% de la cuantía de la pensión mensual, por concepto de aportación al fondo de pensiones, los efectos del amparo deben ser para restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, que en este caso debe entenderse en función del primer acto de aplicación invocado en los respectivos juicios de amparo como aquel acto respecto del cual los quejosos tuvieron conocimiento de que se materializó en su perjuicio la hipótesis prevista en la norma general tildada de inconstitucional.

Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes, y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.

Así lo dejó establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.—Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados."[14]

Ahora bien, este Pleno de Circuito estima que, cuando se reclama en amparo una norma general heteroaplicativa, el hecho de acotar los efectos del fallo protector a partir del primer acto de aplicación señalado en la demanda como el que motivó la promoción del juicio, no resulta incongruente, pues si la pretensión de la parte quejosa, en este caso, por lo que hace al acto reclamado del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, consistió en que le dejara de aplicar el descuento bajo el concepto 83, correspondiente al fondo de pensiones, de las remuneraciones que percibía como pensión, este tribunal advierte que esta última pretensión sí fue resuelta de manera congruente en la sentencia de amparo.

Lo anterior es así, ya que, en la especie, si la impugnación de la norma general fue con motivo de su primer acto de aplicación para efectos de la promoción del juicio de amparo, que se hizo consistir en el comprobante de pago de uno de agosto de dos mil doce, respecto del cual, la parte quejosa manifestó que el día seis de los mismos mes y año tuvo conocimiento de que la deducción identificada en dicho documento con la clave 83, correspondía a la aplicación de la norma reclamada por inconstitucional, entonces, resulta congruente con dicha pretensión que en la sentencia recurrida se concediera la protección constitucional, para el efecto de que el director general del referido instituto hiciera devolución a la parte quejosa de las cantidades descontadas, por ese concepto, a partir del acto de aplicación que en la litis constitucional se tuvo como acreditado con el comprobante de pago de la fecha indicada.

---

[14] Jurisprudencia 1a./J. 33/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 108, registro digital 178783.

En efecto, si fue a partir de dicho acto que la parte quejosa manifestó haber tenido conocimiento que las deducciones a su pensión mensual, por concepto de aportación al fondo de pensiones, correspondía a la aplicación del precepto legal tildado de inconstitucional, debe concluirse que, al haberse invocado como el primer acto de aplicación que materializó la hipótesis contenida en el precepto legal impugnado en el juicio de amparo indirecto, dicho acto constituye el punto de partida para determinar los alcances de los efectos de la protección constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, a partir de ese acto procede restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en la especie, la devolución de las deducciones efectuadas a la cuantía de la pensión del promovente del amparo.

Lo anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias, de cuyo tenor literal es el siguiente.

"AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.—Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Tomo I, materia constitucional, página 195, con el rubro: 'LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.', el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido."[15]

"AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. LA DEVOLUCIÓN COMPRENDE LAS CANTIDADES ENTERADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO Y LOS PAGOS SUBSECUENTES HASTA QUE LA SENTENCIA CAUSE EJECUTORIA.—Conforme a la jurisprudencia

[15] Jurisprudencia 2a./J. 188/2004, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 470, registro digital 179675.

2a./J. 188/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: 'AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.', el efecto de la sentencia que otorga el amparo contra una norma fiscal será, atendiendo a la naturaleza de la misma, que no se aplique en el futuro al particular hasta en tanto no se produzca un nuevo acto legislativo que la reforme, modifique, o incluso repita su contenido y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan las cantidades que como primer acto de aplicación se hayan enterado y las que en forma subsecuente se hayan pagado, si en la sentencia protectora se ordenó la devolución del tributo o ésta sea una consecuencia necesaria de la declaración de inconstitucionalidad. En ese tenor, dicha restitución comprende las sumas enteradas desde el acto de aplicación que sirvió de base para la promoción del juicio y los pagos subsecuentes hasta que la sentencia cause ejecutoria, ya que por virtud de esa concesión, la disposición inconstitucional ya no tendrá que aplicársele al gobernado, pues de lo contrario, las autoridades pueden incurrir en repetición."[16]

Conforme a los anteriores criterios, es pertinente destacar que, al impugnarse normas generales a través del juicio de amparo indirecto, además de resultar necesario determinar su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa para conocer la oportunidad para reclamarlas, también es necesaria dicha distinción cuando resulte procedente otorgar la protección constitucional, al ser impugnadas con motivo de su primer acto de aplicación, ya que, en esta hipótesis, la sentencia que se dicte rige la situación del quejoso no sólo respecto de la ley reclamada, sino también respecto del acto de aplicación cuestionado y en relación con todos los posteriores.

Esto es así, pues de acuerdo con la tesis jurisprudencial emitida por el Alto Tribunal de la Nación, en la que se distingue la naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa de las normas generales, basada en el concepto de individualización condicionada, las señaladas en segundo término requieren para actualizar el perjuicio de un acto diverso –no sólo la emisión de la norma– que condicione su aplicación en un caso concreto, de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo, consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna; por tanto, con-

[16] Tesis 2a. XXXII/2008, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, marzo de 2008, página 277, registro digital 170137.

forme a este criterio de distinción, el primer acto de aplicación será aquel en que por primera vez se actualice la hipótesis normativa.

Las consideraciones hasta aquí expuestas resultan útiles para resolver el problema jurídico objeto de análisis en esta resolución, desde una óptica diferente a la que subyace en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, puesto que los efectos del amparo concedido contra la aplicación del artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no tienen el alcance que le dio el aludido órgano jurisdiccional, esto es, que los efectos del amparo deban ser los de restituir a la parte quejosa las deducciones del 10% de su pensión mensual, por concepto de aportaciones al fondo de pensiones, a partir del primer acto de aplicación que dicho órgano colegiado denominó "acto de aplicación real", para distinguirlo de aquel que, sin ser cronológicamente el primero, fue con relación al cual tuvo conocimiento el quejoso de que se fundaba en la norma reclamada en amparo, implicando, con ello, que deban ser devueltas al quejoso, sin limitación temporal alguna, todas las cantidades retenidas o descontadas al agraviado desde que se le aplicó el precepto por primera vez, con independencia de la fecha del acto de aplicación reflejado en el recibo exhibido con la demanda de amparo.

Este Pleno de Circuito pondera y valora la pretensión del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de otorgar a los alcances del fallo protector un espectro resarcitorio de mayor amplitud en función de la aplicación pretérita de una norma que, a la postre, fue estimada contraria al texto de nuestra Constitución. Sin embargo, los argumentos esgrimidos por el referido tribunal no pueden encontrar acogida por parte del propio Pleno bajo el principio de supremacía constitucional, pues junto a éste, resultan también de imperativa observancia otros principios que obligan a ponderar su convergencia en función de la naturaleza misma del juicio de protección a los derechos fundamentales y sus principios rectores.

Así, debe repararse en la existencia de los principios de relatividad de los efectos de las sentencias de amparo y el de seguridad jurídica que, al igual que lo atinente al alcance, cumplimiento y ejecución de las sentencias protectoras, al derivar de postulados constitucionales, participan de un estrato normativo superior.

Al resolver el amparo en revisión 3912/86, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aludió al principio de relatividad de los efectos de las sentencias que se pronuncien en los amparos contra leyes, establecido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal y en el artículo 76 de la Ley

de Amparo de mil novecientos treinta y seis. Precisó que este principio significa que, en amparo contra leyes, la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo, en virtud de que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo, mas no así a personas ajenas al mismo. Destacó que, por tal razón, no procede en un juicio de amparo hacer una declaración general respecto de la ley, entendiendo esta limitación en el sentido de que dicha declaración tendrá que circunscribirse al quejoso sin beneficiar a otras personas.

El Pleno del Alto Tribunal señaló también que los efectos de una sentencia que otorga el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo, son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si ésta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá, válidamente, serle aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso.

Significó que, por tal razón, el principio de relatividad de la sentencia de amparo no puede entenderse en el sentido de que el amparo contra una ley sólo tiene efectos en relación con el acto de aplicación de la misma que en el juicio respectivo se haya reclamado, pues ello atentaría contra la naturaleza y la finalidad del amparo contra leyes. Así, en la referida ejecutoria concluyó que "*la sentencia que otorga el amparo contra una ley impugnada como autoaplicativa, al igual que el de una ley reclamada como heteroaplicativa, tiene como efecto el de impedir que esa ley sea aplicada válidamente al peticionario de garantías en lo futuro. Por tal motivo, una ejecutoria que otorga el amparo respecto de una ley que es impugnada con motivo de un acto concreto de aplicación no sólo tiene efecto respecto de ese acto concreto, sino también, como en las leyes autoaplicativas, para que esa ley no le sea aplicada válidamente en el futuro*."

Finalmente, precisó que el principio de relatividad de la sentencia de amparo "*significa que la sentencia que otorgue la protección constitucional contra una ley sólo comprenderá al peticionario de garantías, pero que sus efectos serán los de amparar al quejoso contra la ley reclamada* ***no sólo en relación al acto de aplicación con motivo del cual se impugnó****, si fue reclamada como heteroaplicativa, sino, en general, para que la misma no deba volver a serle aplicada*."

Este precedente constituyó jurisprudencia por reiteración, bajo los términos siguientes:

"AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.—El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el prin-

cipio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero **no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley**, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro."[17]

Es cierto que en algunos precedentes de la Segunda Sala de la Suprema Justicia de la Nación se señala que los efectos de la sentencia de amparo actúan "*hacia el pasado*". Sin embargo, no menos cierto es que tales referencias se entienden hechas en función de la propia sentencia emitida en el juicio de derechos fundamentales en cuestión y no considerando como punto de referencia el acto de aplicación invocado por el quejoso al promover el juicio de amparo, pues la aludida Sala ha sido congruente con el pronunciamiento del Pleno del Alto Tribunal, en cuanto a que la protección otorgada al quejoso con motivo del amparo contra leyes opera contra su aplicación presente y futura a partir del acto enjuiciado.

Al efecto, cabe considerar la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 65/97, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. SU PROCEDENCIA REQUIERE QUE EL ACTO SEA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.",[18] en el que la Segunda Sala sostuvo que cuando se impugna una ley con motivo del acto de aplicación, la existencia de éste constituye un factor necesario para la procedencia del juicio de garantías, por lo que, en aras de la seguridad jurídica, debe atenderse a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, porque de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio.

Por otro lado, al resolver la contradicción de tesis 190/2007, la referida Sala expresamente destacó que "*el efecto de la sentencia de amparo pronunciada en favor del quejoso actúa hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio de amparo y los que en su caso se hayan generado durante la promoción del juicio y hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se le aplique la norma declarada inconstitucional.*"

En la referida ejecutoria se reiteró la vigencia e imperatividad de la jurisprudencia 2a./J. 188/2004 de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES.

---

[17] Jurisprudencia P./J. 112/99, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 19, registro digital 192846.
[18] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 207, registro digital 196965.

OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.", y se agregó que el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y que, cuando se trata de una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que la disposición relativa no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan, no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que, de forma subsecuente, hayan sido pagadas, dado que, al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido.

Lo antes destacado parecería sugerir que asiste razón al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa cuando extiende el alcance del fallo protector al denominado "*primer acto de aplicación real*", es decir, aquel en el que, por primera vez, se aplicó la norma impugnada contra el quejoso, con independencia del acto que manifestó en el juicio de amparo por ser el primero del que tuvo conocimiento que estaba fundado en el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, impugnado en el juicio.

Sin embargo, de las ejecutorias que dieron origen a la jurisprudencia 188/2004, se desprende que la Segunda Sala del Alto Tribunal partió de la premisa de que el acto de aplicación invocado en la impugnación de una norma heteroaplicativa debe ser necesariamente el primero, y no algún acto ulterior. Además, conviene tener presente la postura reiterada y subsistente adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando se promueve un juicio de amparo contra una norma general, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador no debe desvincular el estudio de la norma impugnada del que concierne a su acto de aplicación.[19]

---

[19] Tesis aislada P. XVII/99, aprobada por el Pleno del Alto Tribunal, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 34, y jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala, publicada en la fuente y época precitadas, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, ambas con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.", así como las jurisprudencias 208 y 221, sustentadas por el Pleno y contenidas en el *Apéndice* de 1995, Tomo I, Parte SCJN, páginas 201 y 210, respectivamente, con los rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA, Y CONTRA ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. SOBRESEIMIENTO." y "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN."

El análisis de numerosos precedentes tenidos en cuenta por este Pleno de Circuito, para determinar el criterio que debe prevalecer en este caso, lleva a hacer hincapié en los reiterados pronunciamientos provenientes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, tratándose del amparo contra normas generales, los efectos del fallo protector actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos que se hayan generado durante la tramitación del mismo (respecto de estos actos, el Pleno del Alto Tribunal alude al acto de aplicación con motivo del cual se reclamó la ley, refiriéndose al mismo como "*de aplicación presente*"), y hacia el futuro, impidiendo que, en lo sucesivo, se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional (en lo que coincide con el Tribunal Pleno).

Por lo anterior, el juicio de amparo y, con ello, los efectos del fallo protector, no pueden desvincularse del acto de aplicación con motivo del cual se promovió la demanda. Esta vinculación aparece en reiterados criterios del Alto Tribunal, en los que se alude al alcance de los efectos del amparo contra leyes en función del acto de aplicación que motivó la promoción del juicio. Uno de ellos se desprende de la siguiente tesis:

"AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. LA DEVOLUCIÓN COMPRENDE LAS CANTIDADES ENTERADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO Y LOS PAGOS SUBSECUENTES HASTA QUE LA SENTENCIA CAUSE EJECUTORIA.—Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 188/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: 'AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS.', el efecto de la sentencia que otorga el amparo contra una norma fiscal será, atendiendo a la naturaleza de la misma, que no se aplique en el futuro al particular hasta en tanto no se produzca un nuevo acto legislativo que la reforme, modifique, o incluso repita su contenido y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan las cantidades que como primer acto de aplicación se hayan enterado y las que en forma subsecuente se hayan pagado, si en la sentencia protectora se ordenó la devolución del tributo o ésta sea una consecuencia necesaria de la declaración de inconstitucionalidad. En ese tenor, dicha restitución comprende las sumas enteradas desde el acto de aplicación que sirvió de base para la promoción del juicio y los pagos subsecuentes hasta que la sentencia cause ejecutoria, ya que por virtud de esa concesión, la disposición inconstitucional ya no tendrá que apli-

cársele al gobernado, pues de lo contrario, las autoridades pueden incurrir en repetición."[20]

Es cierto que la gran mayoría de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación parten del supuesto de que se reclama el primer acto de aplicación de la norma impugnada en perjuicio del quejoso, dando por sentado que no existen actos de aplicación previos al que se invocó en la demanda de amparo –y de hecho, en algunos casos, se hace referencia a que de existir actos anteriores procedería sobreseer en el juicio–; mientras que en los casos de los que derivaron los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis, los juicios de amparo se promovieron, no a partir del acto que cronológicamente fue el primero que incidió en la esfera jurídica de los quejosos, sino aquel con relación al cual, los quejosos se ostentaron sabedores del acto de individualización en su perjuicio de la hipótesis normativa cuestionada en el juicio de amparo.

Sin embargo, ello no cambia la consideración que este Pleno de Circuito sostiene, en el sentido de que, aun cuando la sentencia de amparo se extiende a los actos de aplicación de la norma declarada inconstitucional, ello debe entenderse en función de los actos de aplicación reclamados en la demanda, y respecto de aquellos que, aunque no se precisaron, son una consecuencia directa e inmediata de la aplicación de la norma con posterioridad a la instauración del juicio, atendiendo, precisamente, al principio de relatividad de los efectos de la sentencia y por motivos de seguridad jurídica derivados, además del alcance de los efectos del fallo protector, del hecho de que los actos de aplicación que no fueron involucrados en la demanda, no formaron parte de la litis constitucional.

La referencia al principio de relatividad de los efectos a la sentencia de amparo destacada por este tribunal, al hacer referencia a la jurisprudencia 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es casual ni aparece introducida de manera forzada en el tema de la determinación de los efectos del fallo protector, sino que se perfila como una referencia obligada en los asuntos que involucran dicho tópico. Así, puede destacarse que, al resolver la contradicción de tesis 52/2004-SS, también la Segunda Sala del Alto Tribunal introdujo tal principio, al resolver un tema relacionado con la devolución de impuestos vinculada con la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley (en este caso, por jurisprudencia de la Suprema Corte

[20] Tesis 2a. XXXII/2008, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, marzo 2008, página 277, registro digital 170137.

de Justicia de la Nación). Al respecto, la referida Sala sostuvo las siguientes consideraciones:

"Sentado lo anterior, no debe dejar de mencionarse que el principio de relatividad que rige en el juicio de garantías no puede ser causa que justifique exceptuar la aplicación obligatoria de la jurisprudencia, cuando ella determine la inconstitucionalidad de leyes, pues tanto los tribunales que no conforman el Poder Judicial Federal, como los que sí lo integran, están sometidos a la ineludible obligación de aplicar la jurisprudencia en los asuntos concretos que se sometan a su jurisdicción.

"El respeto al criterio que contenga una declaratoria de inconstitucionalidad de una ley, implica que ésta deje de observarse en el caso particular que motivó el juicio, pero sin olvidar que eso no significa que puedan darse efectos generales a la jurisprudencia, pues una decisión de tal magnitud consistiría en la derogación de la ley o en su absoluta y colectiva inaplicación, situación evidentemente diversa a la descrita, en la cual se pronuncia sentencia contra la ley en la inteligencia de que 'sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que la motivara', como categóricamente ordena la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Esa protección contra una ley infractora de las garantías individuales, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, otorga al quejoso un derecho para que aquélla no se le aplique en algún caso futuro, si es que por su sola expedición le ocasionó un perjuicio, pero si no tuviera esta característica, sino que para lesionar la esfera jurídica del individuo requiriese de un acto concreto de aplicación, entonces adicionalmente se genera a su favor una prerrogativa para que se deje insubsistente este último, por ser el que lo vinculó al cumplimiento del ordenamiento contraventor de la Constitución.

"Sin embargo, en ambos supuestos, **la tutela de la ejecutoria protectora no produce la anulación de acto alguno emitido con anterioridad al que motivó la instauración del juicio de amparo, ya que esa restitución no está prevista en la ley, ni podría inferirse de su interpretación, pues la fracción II del artículo 107 constitucional prohíbe hacer en las sentencias declaraciones generales más allá 'del caso especial sobre el que verse la queja', y ese impedimento de rango supremo no se refiere únicamente a la imposibilidad de extender a otros individuos el bene-**

ficio del quejoso, sino también a que éste no pretenda hacerlo oponible contra actos anteriores al que reclamó."[21]

Por su parte, el Pleno del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 52/2004-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque abordó el tema relacionado con la aplicación de la suplencia de la queja deficiente, en la ejecutoria se refirió específicamente a los efectos restitutorios del fallo protector concretables en favor del quejoso. Al respecto, sostuvo expresamente que, de acuerdo con el sistema previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, actualmente abrogada, "*la concesión del amparo* ***no tiene efectos retroactivos en la esfera de derechos del quejoso, sino sólo presentes y futuros****; por tanto, el juzgador no podría considerar dicha prerrogativa respecto de actos de aplicación pasados y distintos al que motivó la demanda constitucional, porque sería darle efectos no restitutorios, sino retroactivos a la eventual concesión, creando un esquema diverso al establecido en la ley de la materia, lo cual carecería de fundamento constitucional, así como de base legal*."

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la referida ejecutoria, como uno de los principios rectores del juicio de amparo, el consistente en que el efecto de la concesión del amparo no es retroactivo, sino restitutorio (presente-futuro), y vale la pena destacar que el contexto de la ejecutoria relativa, así como diversas consideraciones sustentadas por el Pleno del Alto Tribunal, estuvieron estrechamente vinculadas con el principio de supremacía de la Constitución y con el respeto a la estructura esencial y los principios rectores del juicio de amparo.

Por otro lado, al resolver la contradicción de tesis 140/2009, la Segunda Sala del Alto Tribunal también se pronunció en torno a la figura de la suplencia de la queja deficiente y a la posibilidad de que la sentencia que, en su momento, se dicte en un juicio de amparo pueda tener eficacia restitutoria. Este Pleno de Circuito no pierde de vista que el tema central de dicha contradicción de tesis giró en torno al amparo contra un ulterior acto de aplicación

---

[21] Cabe destacar que la redacción actual del artículo 107, fracción II, párrafo primero, constitucional –"*Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda*."– permite concluir que sigue vigente el principio de relatividad de los efectos de las sentencias de amparo, que sólo se ve matizado, fundamentalmente, con la incorporación de la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual, por cierto, resulta inaplicable respecto de normas generales en materia tributaria, como es la declarada inconstitucional en los casos de los que derivan los criterios divergentes en análisis.

de una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, como enseguida se evidenciará, algunas de las consideraciones empleadas para resolver el criterio que debía prevalecer, tienen relación con el tema que aquí nos ocupa:

En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que el amparo concedido contra un acto de aplicación de una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia del Alto Tribunal, se caracteriza por una sensible reducción de sus efectos, al no poder invalidar otros perjuicios ocasionados por aplicaciones diversas al acto reclamado, ni tiene el alcance de evitar que en lo futuro la misma ley se aplique nuevamente contra el quejoso, sino que la protección se limita, exclusivamente, a la insubsistencia del acto enjuiciado, para obligar a la autoridad ejecutora a que observe la jurisprudencia, pero sin la posibilidad de generar la invalidez de otras aplicaciones lesivas de los interés jurídicos del quejoso, diversas a la estrictamente impugnada en el juicio.

La Sala destacó que si no fuera así, el amparo contra un acto que no observó dicha jurisprudencia y el amparo contra una ley tendrían efectos equivalentes, y que si no se limitaran los efectos del amparo contra un acto ulterior de aplicación, evitando extender sus efectos al pasado o al futuro, se llegaría al absurdo de disponer la insubsistencia de otros actos de ejecución pretéritos que no figuraron como reclamados en el juicio. Luego, la Segunda Sala del Alto Tribunal sostuvo lo siguiente:

"Sería incoherente, por tanto, que so pretexto del amparo concedido exclusivamente para que una autoridad ejecutora observe una jurisprudencia, se obligue a que otras autoridades, que previamente incurrieron en la misma inobservancia en perjuicio del quejoso, también dejen sin efectos sus actos de aplicación, **pues esta pretensión ni siquiera la puede lograr el amparo contra leyes, el cual se limita solamente a la insubsistencia del primer acto de aplicación de la ley, y los sucesivos, pero nunca afecta ningún acto de aplicación anterior**, pues si esto se propusiera así, tal pretensión implicaría que no se juzgó la primera aplicación de la ley, y que el quejoso, consecuentemente, se condujo con falsedad."

Abundó en el sentido de que, en tales casos, el efecto de la protección constitucional no puede llevarse al extremo de afectar al primer acto de aplicación de dicha disposición, ya que ello equivaldría a dar, incluso, mayores efectos restitutorios de los que se obtendrían con un amparo contra leyes, el cual, aun teniendo una fuerza expansiva más allá del acto de aplicación enjuiciado (respecto de los actos futuros), no logra, sin embargo, afectar actos

acaecidos con anterioridad al primer acto lesivo de la norma cuestionada, pues entonces la sentencia ya no se limitaría a amparar y proteger al quejoso en el caso especial sobre el que versó la queja.

Al respecto, nuevamente invocó el principio de relatividad de las sentencias de amparo, respecto del cual puntualizó que no permitía declarar la insubsistencia de actos que no fueron reclamados, y mucho menos si acaecieron con anterioridad a la emisión del que fue enjuiciado, pues conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 107 constitucional, la sentencia sólo debía de ocuparse de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial en el que versó la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o el acto que la motivare.

Por lo tanto, procede concluir que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo de vigencia anterior, la concesión del amparo contra normas generales heteroaplicativas no tiene efectos retroactivos en la esfera de derechos del quejoso, sino sólo presentes y futuros, por lo que el juzgador no podría considerar dicha prerrogativa respecto de actos de aplicación pasados y distintos al que motivó la demanda constitucional, porque ello implicaría dar al fallo protector efectos no restitutorios, sino retroactivos, creando un esquema diverso al establecido en la ley de la materia, lo cual carecería de fundamento constitucional, así como de base legal.

Además, al haberse planteado la demanda bajo la hipótesis de reclamo de una norma heteroaplicativa, precisamente en función del acto de aplicación en los términos señalados por la parte quejosa, y así haberse dado a conocer a las autoridades responsables, otorgándoles intervención como parte procesal, no es aceptable hacer extensivos los efectos del amparo concedido respecto de actos anteriores al invocado en la demanda que motivó la instauración del juicio, dado que ello constituiría una modificación improcedente de la litis constitucional, con el consecuente estado de indefensión para las autoridades responsables y la inseguridad jurídica derivada de extender los efectos del fallo protector sin limitación temporal alguna hacia el pasado, imprimiendo al mismo un alcance retroactivo que no es propio de la sentencia de amparo.

En consecuencia, la devolución procedente con base en el amparo concedido en contra del artículo 60 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, comprenderá las cantidades retenidas o los descuentos efectuados desde el acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo y todas las posteriores, ya que por virtud de la concesión del amparo, la disposición declarada inconstitucional ya no podría ser aplicada al gobernado.

En estas circunstancias, con fundamento en el artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, deben prevalecer, con el carácter de jurisprudencia obligatoria en el circuito, los criterios que sustenta este Tribunal Pleno, en los siguientes términos:

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS. Conforme al principio de relatividad de las sentencias de amparo, previsto en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, la sentencia sólo debe de ocuparse de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versó la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o el acto que la haya motivado. Con base en este principio, el amparo concedido no puede afectar actos anteriores al señalado como el primer acto de aplicación de la norma reclamada para efectos del juicio, pues entonces la sentencia ya no se limitaría a amparar y proteger al quejoso en el caso especial sobre el que versó la demanda. Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 52/2004-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo expresamente que de acuerdo con el sistema previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo actualmente abrogada, la concesión del amparo no tiene efectos retroactivos en la esfera de derechos del quejoso, sino sólo presentes y futuros; por tanto, el juzgador no puede hacer extensivos los efectos del fallo protector a los actos de aplicación previos y distintos al que motivó la demanda constitucional, porque implicaría dar a la concesión de amparo efectos no restitutorios sino retroactivos, creando un esquema diverso al establecido en la ley de la materia, lo cual carece de fundamento. Además, al reclamarse una norma como heteroaplicativa, precisamente en función del acto concreto de aplicación señalado en la demanda, y así haberse dado a conocer a las autoridades responsables, no es aceptable hacer extensivos los efectos del amparo concedido respecto de actos anteriores al que motivó la instauración del juicio, dado que ello constituiría una modificación improcedente de la litis constitucional, con el consecuente estado de indefensión para las autoridades responsables, y la inseguridad jurídica derivada de extender los efectos del fallo protector sin limitación temporal alguna hacia el pasado, imprimiendo al mismo un alcance retroactivo que no es propio de las sentencias de amparo.

PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO. Los efectos del amparo contra la referida norma general, para que le sean restituidas a la parte quejosa las deducciones de la cuantía de su pensión mensual, correspondiente al 10% como aportación al fondo de pensiones, sólo pueden abarcar a partir del primer acto de aplicación respecto del cual el quejoso manifiesta que tuvo conocimiento de la aplicación en su perjuicio de la hipótesis prevista en la norma reclamada, y con motivo del cual se promovió la acción de amparo, no obstante que de las actuaciones del juicio se adviertan actos de aplicación anteriores, pues al no haber sido reclamados en la demanda ni invocados como el primero de aplicación de la norma reclamada, no forman parte de la litis en el juicio, por lo que no es aceptable hacer extensivos los efectos del amparo concedido respecto de tales actos, dado que ello constituiría una modificación improcedente de la litis constitucional, con el consecuente estado de indefensión para las autoridades responsables, y la inseguridad jurídica derivada de extender los efectos del fallo protector sin limitación temporal alguna hacia el pasado, imprimiendo al mismo un alcance retroactivo que no es propio de las sentencias de amparo, dado que las mismas sólo tienen efectos restitutorios.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos del Quinto Circuito, en términos del considerando quinto de esta resolución.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno del Quinto Circuito, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

TERCERO.—Dése publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los tribunales contendientes, así como a los demás Tribunales Colegiados del Quinto Circuito para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, remítase copia certificada de esta ejecutoria a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Quinto Circuito, por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, Francisco Domínguez Castelo, Hugo Gómez Ávila y el Magistrado ponente Federico Rodríguez Celis, contra el voto del Magistrado Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz, quien formula voto particular; en tanto que el Magistrado Hugo Gómez Ávila se reservó el derecho de formular voto aclaratorio, por considerar que de las dos jurisprudencias propuestas, sólo debía aprobarse como tal aquella que se refiere al caso específico.

Firman los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, presidente del Pleno del Quinto Circuito, así como los Magistrados Francisco Domínguez Castelo, Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz, Hugo Gómez Ávila y el Magistrado ponente Federico Rodríguez Celis, con la secretaria de Acuerdos, licenciada Laura Catalina Maldonado Arce, quien autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular del Magistrado Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en la contradicción de tesis 3/2013.

Disiento del criterio de la mayoría, en primer término, porque parte de una premisa equivocada (foja 22), al decir que el punto de contradicción estriba en establecer si los efectos de la concepción del amparo deben consistir en la restitución de las cantidades descontadas con anterioridad al "primer acto de aplicación" de la ley heteroaplicativa impugnada de inconstitucional, o únicamente las cantidades descontadas correspondientes al acto de aplicación que motivó la promoción del juicio de amparo y las subsecuentes.

En realidad, ambos tribunales coinciden en que la restitución debe ser a partir del primer acto de aplicación de la ley heteroaplicativa impugnada de inconstitucional, y el disenso consiste en identificar el primer acto de aplicación, pues el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito considera como primer acto de aplicación el primer descuento hecho al quejoso, con fundamento en el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; a su vez, el Primer Tribunal Colegiado en la misma categoría, estima que el primer acto de aplicación es el que se precisó en la demanda de amparo, además, agrega que los descuentos anteriores no formaron parte de la litis constitucional, por no haber sido involucrados en la demanda de amparo.

En segundo término, estoy en contra de la mayoría, habida cuenta que si bien es cierto que los quejosos señalaron como acto reclamado el descuento correspondiente al

mes de agosto de dos mil doce, no lo es menos que ambos hicieron referencia de esa mensualidad para efectos de computar la oportunidad de la promoción del amparo, aclarando que hasta entonces tuvieron conocimiento de la ley impugnada, y en los juicios de amparo se acreditó que la autoridad responsable, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, les había hechos descuentos en meses anteriores a agosto de dos mil doce, sin que los promoventes hayan sido informados de la aplicación del mencionado artículo 60 Bis B de la ley impugnada; ahora bien, la litis en el juicio de amparo, al igual que en cualquier controversia, se integra no solamente con lo que el actor (quejoso) dice en la demanda (constitucional), sino también con lo que la autoridad responsable (demandada en el juicio de amparo) aduce en su contestación (informe con justificación).

Luego entonces, la litis constitucional incluyó los descuentos hechos con anterioridad a la mensualidad mencionada que se invocó para fijar la oportunidad de la promoción de amparo.

En este orden de ideas, resulta incuestionable la conclusión en el sentido de que la autoridad responsable debe restituir en favor de los quejosos no sólo la cantidad retenida por el mes de agosto de dos mil doce y posteriores, sino también las anteriores a partir del primer descuento hecho, con fundamento en el artículo 60 Bis B de la ley mencionada, pues sólo de esa manera se restituye en la garantía individual violada, conforme a una recta intelección del artículo 80 de la Ley de Amparo.

En tercer término, difiero del criterio de la mayoría, porque desde la reforma constitucional publicada el diez de junio de dos mil once, en particular, el artículo 1o. de la Constitución, existe un nuevo paradigma en materia de aplicación e interpretación de la ley, consistente en la protección de los derechos humanos, y que se refleja en el principio "pro persona", que para efectos prácticos se traduce en apreciar o interpretar la ley en beneficio en la persona, en cuanto al titular de los derechos humanos.

En estricto apego al nuevo paradigma en materia constitucional, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que preside el suscrito, considera que la interpretación "pro persona" del artículo 80 de la Ley de Amparo, consiste en que la litis constitucional incluyó todos los descuentos hechos con fundamento en el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, esto es, el primer descuento hecho con base en la mencionada ley, no sólo el descuento correspondiente a la mensualidad posterior que el quejoso señaló para efectos de ligar la oportunidad de la promoción del amparo, puesto que el acto anterior, mas no el posterior, lógicamente constituye el primer acto de aplicación de la ley inconstitucional, y sí formó parte de la litis en el juicio de amparo.

A mayor abundamiento, cabe agregar que cualquier persona que hace un pago en lo indebido, tiene derecho a que se lo restituya la persona que lo recibió sin tener derecho alguno y, para lograr esa finalidad, se debe interpretar el artículo 80 de la Ley de Amparo, de acuerdo con el principio "pro persona", sin que implique una aplicación retroactiva de la ley.

Por el contrario, el criterio de la mayoría se funda en la aplicación de los principios de la relatividad de la sentencia de amparo y seguridad jurídica, pero no resuelve la contradicción desde la perspectiva del nuevo paradigma constitucional de los derechos humanos, que ni siquiera lo estudia.

Finalmente, la opinión del Tribunal Colegiado que me honro en presidir, sigue la línea de pensamiento de Christian Steiner, director del programa Estado de derecho para América Latina, de la fundación *Konrad Adenauer*, quien expresó en la presentación de la obra que se cita, las palabras siguientes: "Esta responsable labor del operador, en clave de derechos, no significa un desprecio generalizado a la ley, pero sí su aplicación e interpretación a la luz de los derechos de la persona. Con ello, hablamos de un Estado que no actúa apegado a un ciego formalismo, sino de un Estado humano."[22]

En términos de lo previsto en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto aclaratorio que formula el Magistrado Hugo Gómez Ávila, en la contradicción de tesis 3/2013.

Comparto las consideraciones de la ejecutoria, así como el sentido en cuanto a cuál criterio debe prevalecer. Sin embargo, considero que la única tesis que debió formar parte del criterio es la segunda de las propuestas; ello, en razón de que trata del caso concreto materia de la controversia, sin que fuera necesaria la primer tesis que comprende a todas las normas generales heteroaplicativas.

En términos de lo previsto en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS. Conforme al principio de relatividad de las sentencias de amparo, previsto en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, la sentencia sólo debe de ocuparse de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que versó la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o el acto que la haya motivado. Con base en este principio, el amparo concedido no puede afectar actos anteriores al señalado como el primer acto de aplicación de la norma reclamada para efectos del juicio, pues entonces la sentencia ya no se limitaría a amparar y proteger al quejoso en

[22] "*Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana*.", tomo I, página XVII.

el caso especial sobre el que versó la demanda. Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 52/2004-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo expresamente que de acuerdo con el sistema previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo actualmente abrogada, la concesión del amparo no tiene efectos retroactivos en la esfera de derechos del quejoso, sino sólo presentes y futuros; por tanto, el juzgador no puede hacer extensivos los efectos del fallo protector a los actos de aplicación previos y distintos al que motivó la demanda constitucional, porque implicaría dar a la concesión de amparo efectos no restitutorios sino retroactivos, creando un esquema diverso al establecido en la ley de la materia, lo cual carece de fundamento. Además, al reclamarse una norma como heteroaplicativa, precisamente en función del acto concreto de aplicación señalado en la demanda, y así haberse dado a conocer a las autoridades responsables, no es aceptable hacer extensivos los efectos del amparo concedido respecto de actos anteriores al que motivó la instauración del juicio, dado que ello constituiría una modificación improcedente de la litis constitucional, con el consecuente estado de indefensión para las autoridades responsables, y la inseguridad jurídica derivada de extender los efectos del fallo protector sin limitación temporal alguna hacia el pasado, imprimiendo al mismo un alcance retroactivo que no es propio de las sentencias de amparo.

PLENO DEL QUINTO CIRCUITO
PC.V. J/1 A (10a.)

Contradicción de tesis 3/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 27 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, Francisco Domínguez Castelo, Hugo Gómez Ávila y Federico Rodríguez Celis; el Magistrado Hugo Gómez Ávila formuló voto aclaratorio, en el que estimó innecesaria la emisión de esta tesis, al comprender a todas las normas generales heteroaplicativas. Disidente: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Ponente: Federico Rodríguez Celis. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 361/2012, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 381/2012.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 52/2004-PL citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 447.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO. Los efectos del amparo contra la referida norma general, para que le sean restituidas a la parte quejosa las deducciones de la cuantía de su pensión mensual, correspondiente al 10% como aportación al fondo de pensiones, sólo pueden abarcar a partir del primer acto de aplicación respecto del cual el quejoso manifiesta que tuvo conocimiento de la aplicación en su perjuicio de la hipótesis prevista en la norma reclamada, y con motivo del cual se promovió la acción de amparo, no obstante que de las actuaciones del juicio se adviertan actos de aplicación anteriores, pues al no haber sido reclamados en la demanda ni invocados como el primero de aplicación de la norma reclamada, no forman parte de la litis en el juicio, por lo que no es aceptable hacer extensivos los efectos del amparo concedido respecto de tales actos, dado que ello constituiría una modificación improcedente de la litis constitucional, con el consecuente estado de indefensión para las autoridades responsables, y la inseguridad jurídica derivada de extender los efectos del fallo protector sin limitación temporal alguna hacia el pasado, imprimiendo al mismo un alcance retroactivo que no es propio de las sentencias de amparo, dado que las mismas sólo tienen efectos restitutorios.

PLENO DEL QUINTO CIRCUITO
PC.V. J/2 A (10a.)

Contradicción de tesis 3/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 27 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, Francisco Domínguez Castelo, Hugo Gómez Ávila y Federico Rodríguez Celis. Disidente: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Ponente: Federico Rodríguez Celis. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 361/2012, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 381/2012.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X –PRIMERA PARTE–, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA, HUGO GÓMEZ ÁVILA, FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS, JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS Y FRANCISCO DOMÍNGUEZ CASTELO. PONENTE: FRANCISCO DOMÍNGUEZ CASTELO. SECRETARIA: CLAUDIA GUADALUPE TÉLLEZ FIMBRES.

Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Pleno del Quinto Circuito correspondiente al veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—**Denuncia.** Por oficio número 1/2014-ST de diez de febrero de dos mil catorce, recibido el doce siguiente, en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, recinto oficial que se comparte con el Pleno del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, los Magistrados Hugo Gómez Ávila (presidente), Arturo Castañeda Bonfil y David Solís Pérez, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho órgano al resolver los juicios de amparo directo en materia laboral 1116/2012, 1050/2012 y 266/2013, por unanimidad de votos; así como los números 1051/2012 y 1152/2013 por mayoría de votos (con voto en contra del Magistrado Hugo Gómez Ávila), y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio circuito, al fallar el amparo directo laboral 858/2011.

SEGUNDO.—**Trámite de la denuncia.** Por acuerdo de doce de febrero de dos mil catorce, la Magistrada Armida Elena Rodríguez Celaya, presidente del Pleno del Quinto Circuito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis con el número 1/2014; agregar las copias

certificadas de las ejecutorias de los juicios de amparo directo en materia laboral 1116/2012, 1050/2012, 266/2013, 1051/2012 y 1152/2013 del índice del tribunal denunciante; solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, que remitiera copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo laboral 858/2011, de su índice; asimismo, requirió a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes, para que informaran si los criterios sustentados en tales asuntos se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, la Magistrada presidente del Pleno de Circuito, ordenó notificar a la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, de la tramitación de la contradicción de tesis para su registro y control correspondiente; y notificar a los Tribunales Colegiados del mismo circuito para que tomaran las medidas pertinentes con relación a los asuntos por resolver y que estuvieran relacionados con la denuncia de contradicción de tesis.

De conformidad con el punto 17, inciso g), de las Reglas Básicas relacionadas con el Funcionamiento del Pleno del Quinto Circuito,[1] se ordenó hacer del conocimiento del agente del Ministerio Público por conducto del delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Sonora, de la denuncia de contradicción de tesis para que, de estimarlo pertinente, expusiera lo que a la representación social conviniera.

Por auto de veinte de febrero de dos mil catorce, se recibieron las copias certificadas de la ejecutoria de veintiséis de junio de dos mil doce, pronunciada en el amparo directo laboral 858/2011, del registro del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.

En acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Magistrada presidente del Pleno del Quinto Circuito, consideró debidamente integrado el

---

[1] Reglas Básicas Relacionadas con el Funcionamiento del Pleno del Quinto Circuito.
"... 17. Al presentarse alguna contradicción o algún asunto que sea competencia del Pleno del Quinto Circuito, el presidente, además de observar lo que al respecto dispone la Ley de Amparo y el acuerdo general 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, también deberá:
"...
"g) Asimismo, y aun cuando en términos de la Ley de Amparo en vigor y demás ordenamientos legales aplicables, en las contradicciones de tesis no tiene intervención el agente del Ministerio Público de la Federación ni la Procuraduría General de la República, la admisión de la contradicción de tesis de que se trate, será notificada al Ministerio Público, por conducto del delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, para que si lo estima pertinente, exponga lo que a la representación social convenga."

asunto y de acuerdo al orden establecido en el punto 16 de las Reglas Básicas Relacionadas con el Funcionamiento del Pleno de este Quinto Circuito,[2] ordenó la remisión de los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente y en posterior auto de veintiséis de marzo de dos mil catorce, se tuvo por recibido el proyecto del Magistrado referido.

Mediante acta de sesión pública ordinaria 01/2014, se asentó que, en sesión celebrada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, por el Pleno del Quinto Circuito, se sometió el proyecto de resolución aludido a consideración de los integrantes del Pleno para su discusión y análisis, hecho lo cual, una vez tomada la votación correspondiente, se desechó la propuesta formulada por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Francisco Domínguez Castelo, Federico Rodríguez Celis, Hugo Gómez Ávila y Armida Elena Rodríguez Celaya, contra el voto del Magistrado ponente Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz.

Asimismo, en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 38 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se sometió a consideración del Pleno el returno del asunto desechado, propuesta que fue aprobada por unanimidad de votos, por lo que, atendiendo al orden previsto en el punto 16 de las Reglas Básicas Relacionadas con el Funcionamiento del Pleno del Quinto Circuito, el turno siguiente correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito para la elaboración del nuevo proyecto de resolución.

TERCERO.—Pedimento. El agente del Ministerio Público de la Federación, no formuló pedimento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno del Quinto Circuito, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de

---

[2] Reglas Básicas Relacionadas con el Funcionamiento del Pleno del Quinto Circuito
"16. Los asuntos de los que conozca este Pleno del Quinto Circuito, se turnarán bajo estricto orden consecutivo, el cual es el siguiente:
"1o. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.
"2o. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
"3o. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
"4o. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
"5o. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito."

conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el citado medio oficial el treinta de mayo de dos mil catorce.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.

TERCERO.—**Objeto concreto de la denuncia.** La cuestión sobre la que versa la denuncia, consiste en determinar si el supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, actualiza o no la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X –primera parte–, de la abrogada Ley de Amparo, que establece que en los juicios seguidos ante tribunales trabajo (sic), se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando el tribunal continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia.

CUARTO.—**Criterios contendientes.** A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes a través de las ejecutorias respectivas:

I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Quinto Circuito.

Criterio. El supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, no actualiza la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X –primera parte–, de la abrogada Ley de Amparo.

Tal criterio derivó de lo resuelto en el juicio de amparo 858/2011, en el que se sustentó esencialmente:

"SEXTO.—Las consideraciones que integran los conceptos de violación hechos valer por la quejosa y que serán materia de estudio, son inoperantes en parte, infundadas en otra y fundadas en una más, por ende, eficaces para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

"Se estima pertinente aclarar, que algunos de los disensos serán analizados de manera conjunta, ya que así lo permite el artículo 79 de la ley de la materia; además, por cuestión de método, en orden diverso al en que fueron esgrimidos.

"Por tratarse de cuestiones que deben ser atendidas previamente a cualquier otra, se estudiará en primer término lo alegado en cuanto a supuestas violaciones al procedimiento laboral de origen.

"En el concepto de queja identificado como noveno, aduce la moral impetrante que una violación procesal resultó del hecho de que la responsable, a pesar de haberse declarado incompetente en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que se impugna; aun cuando mediante auto de veintidós de junio de dos mil cinco, con infracción a los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, haya revocado aquel acuerdo.

"Deviene inoperante el disenso en estudio, cuenta habida que, si bien la quejosa precisa que lo que está impugnando como violación procesal no es si la Junta responsable es o no competente para conocer de la controversia laboral que le fue planteada, sino que 'a pesar de haberse declarado incompetente, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que se impugna por la presente vía', lo que encuadra en la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo; (transcribe texto en pie de página) lo cierto es que, la responsable no siguió conociendo del juicio después de haberse declarado incompetente para ello, como se establece en la hipótesis normativa a que alude la impetrante.

"En efecto, de las constancias sumariales se desprende lo siguiente:

"1. Con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, José Alfredo Saavedra Zambrano, presentó la demanda laboral de origen, ante la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Hermosillo (fojas 1 a la 12 del expediente natural).

"2. En auto de veintiuno de febrero de dos mil, dicha Junta se declaró incompetente para conocer del conflicto, porque no se daban, según expuso, ninguno de los supuestos señalados en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que ordenó remitir el expediente a la Oficialía de Partes Común de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para que lo turnara a la Junta Especial competente en esa ciudad, por tener la demandada su domicilio en la misma (foja 13 Ibíd).

"3. En auto de diecinueve de mayo de dos mil, la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en México, Distrito Federal, tuvo por recibido el expediente de origen; sin embargo, acordó devolverlo a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que dicha autoridad procediera a realizar la notificación del auto de veintiuno de febrero de dos mil y que una vez que causara estado la resolución de competencia, esa Junta estaría en la posibilidad jurídica de avocarse al conocimiento del asunto (foja 14).

"4. En auto de veinte de junio de dos mil, la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, tuvo por recibido el expediente y visto el contenido del acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil, dictado por la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, comisionó al actuario adscrito para que notificara a las partes el mencionado auto de veintiuno de febrero de dos mil (foja 15).

"5. Con fechas dieciséis de agosto y veintiséis de septiembre de dos mil, el actuario adscrito a la Junta responsable, notificó a la demandada y a la actora, respectivamente, del acuerdo de incompetencia; dándose el actor además por notificado del citado acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil, a través de promoción presentada ante dicha Junta, el veintisiete de junio de dos mil dos, lo que se (sic) así se acordó en auto de veintiuno de agosto de esa anualidad (fojas 16, 17, 19 y 20).

"6. En la siguiente actuación que obra en la causa, que lo es el acuerdo de veintidós de junio de dos mil cinco, la responsable determinó lo que a continuación se reproduce: (transcribe texto)

"Luego, con base en el contexto apuntado se advierte que, como se anticipó, la Junta responsable no siguió conociendo del juicio de que se trata después de haberse declarado incompetente para ese fin; sino que posterior

a esa declaratoria, con el estado procesal de los autos, y las razones y fundamentos legales que expuso en el referido acuerdo de veintidós de junio de dos mil cinco, determinó que no existía razón alguna para declinar su competencia; por lo que se declaró competente para conocer del juicio laboral de mérito, precisando que ello, no constituía una revocación de una determinación tomada, sino una regularización a efecto de corregir un error, en términos de lo establecido en el artículo 686, segundo párrafo, de la ley laboral.

"Enseguida la responsable decretó la continuación del procedimiento, fijando fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, con citación de las partes; para después seguir el juicio hasta el dictado del laudo.

"En tal virtud, si bien, con motivo de una declaratoria de incompetencia la Junta deja de tener jurisdicción para seguir conociendo del juicio laboral; en el caso concreto, aun cuando la responsable realizó esa declaratoria y remitió el expediente a la Junta que estimó competente para ello, posteriormente a que se le devolvió por esta última dicho expediente, por no encontrarse notificadas las partes de la aludida declaratoria ni encontrarse firme la misma; la responsable no mantuvo esa incompetencia, por el contrario, decretó en el diverso acuerdo de veintidós de junio de dos mil cinco, que no existía ninguna razón para declinar su competencia.

"Por tanto, no es verdad que la Junta responsable, después de declararse incompetente haya continuado con el conocimiento del juicio y dictado el laudo que se impugna; ya que para ello medió el multicitado auto de veintidós de junio de dos mil cinco, en el que sostuvo su competencia jurisdiccional; de ahí que no se actualiza la violación procesal contemplada en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, relativa a que el tribunal del trabajo continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia.

"Sin que al respecto se pase por alto la alegación de la moral quejosa, en el sentido de que la responsable, con el dictado del acuerdo de veintidós de junio de dos mil cinco, revocó, con infracción a los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, el de veintiuno de febrero de dos mil; sin embargo, al no encontrarse contemplado ese caso como violación procesal, en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ni estimarse análogo a los ahí previstos, la impetrante debió combatirlo, de así considerarlo pertinente, a través del juicio de amparo indirecto y no como violación procesal en el amparo directo, como lo es el presente juicio.

"Por otro lado, en parte del tercero de los disensos se señala como violación procesal, que no se perfeccionaron diversas probanzas ofrecidas por la impetrante, pese a que se propuso dicho perfeccionamiento.

"En específico, la quejosa alega, que no se perfeccionaron las pruebas que en copia fotostática simple exhibió, relativas al convenio finiquito de la relación laboral y la cláusula treinta del contrato colectivo de trabajo; alegación ésta que se declara inoperante, puesto que aun cuando no se hubieran perfeccionado dichas probanzas, lo cierto es que la única condena decretada en contra de la quejosa (horas extras), no descansa en el hecho de que esas documentales sean copias simples, por el contrario, la segunda de ellas se valoró como auténtica y se desestimó por no tener el alcance demostrativo para destruir el reclamo de horas extras.

"Es decir, ninguna trascendencia tiene al resultado del fallo, el hecho de que se haya omitido el perfeccionamiento que se menciona, ya que para ello era necesario que se les negara crédito convictivo, por tratarse de copias simples, lo que aquí no sucedió y ello hace que la supuesta violación procesal denunciada, no sea trascendente y el alegato correspondiente sea inoperante.

"Superadas las cuestiones procedimentales referidas, se estima que son inoperantes las argumentaciones que expone la quejosa en diversos apartados de los motivos de inconformidad que se identifican como primero y segundo, acerca de que la Junta no analizó debidamente la excepción de prescripción que hizo valer en su contestación de demanda, en relación a las prestaciones consistentes en salarios retenidos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro, salarios caídos, diferencias de salario integrado, pago del 20% por concepto de ayuda de renta de casa; porque dice que la invocó respecto de cualquier prestación susceptible de haber sido generada con más de un año de anterioridad a la fecha de interposición de la demanda que ocurrió el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

"La inoperancia aludida, deviene del hecho de que en el laudo reclamado se absolvió a Ferrocarriles Nacionales de México de pagar al actor todas esas prestaciones que menciona la ahora impetrante; de ahí que, ningún agravio le irroga que el tribunal obrero no hubiera abordado, como lo afirma la quejosa, el análisis de la excepción de prescripción en relación a tales prestaciones, si como se indica, a la postre, esto es, en el estudio que la responsable llevó a cabo del fondo del asunto, la absolvió del pago de las mismas.

"En otro contexto, son infundadas las argumentaciones que se esgrimen en parte del tercero, del cuarto y del sexto de los conceptos de queja, porque

en oposición a lo aducido por la empresa ferrocarrilera, aquí inconforme, no correspondía al trabajador acreditar la duración de su jornada laboral, pues el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo contrario, esto es, que esa carga procesal debe recaer en el empleador.

"Asimismo, aun cuando efectivamente al operario correspondió la carga de probar en juicio que poseía un permiso especial expedido por el patrón, para efectos de laborar horas extras, y que además exista en autos, como lo arguye la inconforme, la confesión ficta de aquél, acerca de que era de su conocimiento que para laborar tiempo extraordinario al servicio de Ferrocarriles Nacionales de México se requiere de instrucciones por escrito; no menos verídico resulta que esa imposición se actualizaba una vez que la sociedad demandada lograra acreditar que en su negocio de ordinario se expedían esas autorizaciones, lo cual no aconteció en la especie, esto es, la ferrocarrilera nunca aportó medio de convicción alguno tendente a poner de manifiesto que siempre que se trabajaba tiempo extraordinario en su empresa, era porque ello estaba autorizado por escrito.

"Ahora bien, carece de sustento legal, cuando en diversos apartados de los conceptos de violación en estudio, dice la quejosa que la jornada de labores no es un hecho controvertido en razón de que el actor confesó en la demanda de origen, el horario legal de labores de ocho horas y que, por tanto, a la quejosa no le correspondía demostrar esa cuestión; pues contrario a su parecer, en el escrito de referencia no existe tal confesión, porque lo único que ahí se manifestó fue que el actor prestó sus servicios personales y subordinados a la demandada dentro de una jornada ordinaria de trabajo de siete a catorce horas de lunes a sábado, empero, ello no constituye una aceptación expresa de que únicamente laboró esas horas.

"Por el contrario, seguida de esa manifestación, el actor dijo que al concluir la jornada ordinaria, iniciaba una extraordinaria que culminaba a las dieciséis horas de lunes a sábado de cada semana, razón por la cual reclamó ese tiempo extra que afirmó haber laborado y que no se le pagó.

"Como se advierte, la carga procesal impuesta a la patronal, no fue únicamente para que demostrara cuál era la jornada legal u ordinaria, sino que acreditara que el trabajador únicamente laboró ese lapso ordinario y no horas extras, pues aun aceptando que no existe controversia sobre la jornada ordinaria, ello no implica que no la haya en cuanto a si el trabajador únicamente laboró la jornada ordinaria y no la extraordinaria.

"Por otro lado, tampoco puede decirse que las horas extras reclamadas, sean inverosímiles, ya que ello sucede cuando por el número y el periodo

de horas extras, pueda presumirse o entenderse que acorde con la naturaleza humana, el común de las personas no puedan laborar en esas condiciones; esto es, debe ponderarse si a pesar del tiempo extraordinario laborado, se puede contar con tiempo suficiente para reposar, comer y reponer energías, lo que en la especie es susceptible, tomando en cuenta que el tiempo extraordinario reclamado, fueron dos horas por día de lunes a sábado, lo cual implica que es un lapso razonable en el que el operario, de inicio cuenta con un día a la semana para descansar y recuperar energías, y además, dos horas por día laboradas en forma extraordinaria, no implica una carga que el común de las personas no pueda solventar favorablemente.

"Guarda afinidad, en lo que interesa, la jurisprudencia 251, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 201, Tomo V, Trabajo, jurisprudencia, SCJN, Octava Época, *Apéndice* de 2000, cuyos rubro y texto son:

"'HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES.' (transcribe texto)

"En otro aspecto, se consideran fundados los disensos tercero (en un diverso apartado) y quinto, en los que aduce una violación de tipo formal, consistente en que la responsable no valoró, la documental ofrecida por la quejosa en el numeral cuatro, inciso a), del escrito correspondiente, es sustancialmente fundado, pues como se alega, la Junta responsable, para efectos de determinar que la patronal demandada no demostró que el trabajador únicamente laboró una jornada ordinaria de ocho horas por día, partió de la premisa fundamental de que no se demostró que en la empresa, cuando se labora tiempo extraordinario, es por orden escrita; sin embargo, omitió ponderar las manifestaciones contenidas en el propio convenio cuya nulidad se pretendió, ofrecido tanto por la actora como por la demandada.

"En efecto, si en todo caso, el tribunal del trabajo estimaba que era innecesaria dicha ponderación, ello debió haberlo establecido en el laudo reclamado, exponiendo para tal efecto, el debido fundamento y motivación, es decir, citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a tal conclusión; de tal manera que si en la especie, se omitió hacer la valoración correspondiente y no se justificó de manera fundada y motivada por qué se actuó en esa forma, es evidente que, asiste razón a la quejosa, cuando manifiesta en el disenso que nos ocupa, que la citada autoridad dejó de valorar aquella probanza y no justificó dicha omisión.

"En tales condiciones, es claro que la Junta responsable dejó de analizar y valorar correctamente las pruebas desahogadas en el juicio natural, pues se

concretó a señalar que la demandada no aportó medio de convicción tendente a demostrar la jornada laboral, pasando por alto la documental consistente en el convenio de terminación de la relación laboral.

"Así las cosas, el laudo reclamado es contrario al principio de congruencia establecido en los artículos 840, fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la Junta responsable omitió valorar todas y cada una de las pruebas aportadas al juicio de origen.

"De igual forma, son fundados los argumentos aducidos en el resto del primero y del segundo conceptos de violación, así como en parte del octavo, porque como lo dice la empresa promovente del amparo, la excepción de prescripción que hizo valer en contra de la reclamación de pago de horas extras, fue para que se declarara prescrita esa prestación en relación a las pretendidas a partir de un año antes de la presentación de la demanda y que si ésta fue presentada el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, el término prescriptivo debía computarse de esa fecha al catorce de julio de un año anterior, es decir, de mil novecientos noventa y ocho.

"No obstante, la Junta responsable en contravención a los artículos 841 y 842 de la ley obrera en consulta, condenó al pago de horas extras reclamadas, durante el último año laborado; pues como se denuncia, en el considerando IX del laudo que nos ocupa, la Junta sostuvo que al haberse declarado procedente la excepción de prescripción opuesta por la empresa demandada, únicamente se le cubrirían al actor las horas extras por el último año laborado, 'es decir las comprendidas del 29 de marzo de 1998 al 29 de marzo de 1999', lo cual, ciertamente dista mucho del contenido de dicha excepción; de ahí que sea fundado el disenso en cuanto a esa incongruencia en el laudo.

"En efecto, no es lo mismo que la condena abarque el último año laborado, a que se imponga la obligación en razón de un año antes de la presentación de la demanda, como se hizo valer al oponer la excepción, tomando en cuenta que la relación de trabajo culminó por mutuo consentimiento, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, de manera tal que, si la demanda de origen fue presentada el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, en todo caso, la condena al pago de tiempo extraordinario, debe abarcar a partir del catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho, lo cual implica que sólo puede haber condena desde este último día, hasta la fecha en que se dio por terminada la relación de trabajo, que lo fue el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y no del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho al veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, como decretó la condena la responsable.

"Siendo así, como lo alega la impetrante, en esa parte el laudo resulta incongruente, al no analizarse la excepción prescriptiva en la forma y términos que fue planteada, violándose en perjuicio de la quejosa, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El séptimo motivo de queja resulta infundado, cuenta habida que, opuesto a lo que se alega, el salario que debe servir de base para calcular las horas extras, es el previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación entregada al trabajador por su trabajo; puesto que así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 190/2009, misma que generó la jurisprudencia 2a./J. 137/2009. De ahí que tampoco sean aplicables al respecto, las tesis de Tribunales Colegiados que cita como apoyo la impetrante, porque con independencia de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, no resultan obligatorias para este tribunal, son de contenido contrario a dicha jurisprudencia, la cual se encuentra publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 598 y cuyo contenido es el siguiente:

"'HORAS EXTRAS. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE SERVIR DE BASE EL SALARIO INTEGRADO POR SER EL QUE SE PAGA EN LA JORNADA ORDINARIA.' (transcribe texto)

"Asimismo, es inexacto que el tribunal obrero haya tomado en consideración para integrar el salario, las prestaciones consistentes en vacaciones y prima vacacional; dado que, como fácilmente se colige de la parte final del considerando VIII, la Junta sólo consideró como prestaciones que en la especie integran el salario del actor, las de: canasta básica, ayuda de ropa de trabajo, ahorro, aguinaldo y ayuda por útiles escolares.

"Ahora bien, como se desprende de lo anterior, ciertamente la responsable consideró para integrar el salario de mérito, las prestaciones de aguinaldo y fondo de ahorro; ello es acorde lo establecido también por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal, al decidir las contradicciones de tesis: 94/2001-SS y 260/2010, que dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 33/2002 y 2a./J. 13/2011, visibles en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomos XV, mayo de 2002 y XXXIII, febrero de 2011, páginas 269 y 1064, respectivamente, que a la letra dicen:

"'SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.' (transcribe texto)

"'SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE AQUÉL.' (transcribe texto)

"En consecuencia, ante lo fundado de una parte de los disensos vertidos, se impone conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que, reitere lo que no fue materia de la concesión, ni de análisis en esta ejecutoria; asimismo, siguiendo los lineamientos expuestos en la misma, analice la excepción de prescripción en la forma y términos que se hizo valer en torno a las horas extras reclamadas, valorando el convenio de terminación de la relación laboral ofrecido tanto por el actor como por el demandado, respecto de las manifestaciones ahí contenidas, en cuanto al horario que adujo haber laborado el trabajador, resolviendo así, lo que conforme a derecho corresponda.

"Dados los términos de la concesión del amparo, es innecesario el análisis de la inconformidad aducida en una parte del concepto de queja identificado como octavo, atinente a las operaciones aritméticas que llevaron a la responsable a la convicción que correspondían trescientas doce horas extras por el periodo que estimó, porque al concederse la protección constitucional para los efectos expuestos, trae como consecuencia que quede insubsistente el laudo que constituye el acto reclamado y ese motivo de disenso puede quedar subsanado con la emisión del nuevo fallo; ya que la responsable habrá de definir en el nuevo laudo que pronuncie, lo relativo al periodo que abarcó el tiempo extraordinario laborado por el trabajador, lo que desde luego impacta en cuanto el primer tópico, esto es, sobre las operaciones aritméticas que la lleven a determinar el cálculo que en su caso corresponda por dichas horas extras.

"Al respecto tiene aplicación la tesis V.1o.C.T. 82 L, emitida por este órgano colegiado, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 1308, que textualmente dice:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SI SE ESTIMA FUNDADO UNO DE LOS RELATIVOS A CUESTIONES PROCESALES EN UN LAUDO, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES EN QUE SE ALEGAN CUESTIONES DE FONDO.' (transcribe texto)

"Tal concesión se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del presidente y del actuario ejecutor adscritos a la Junta laboral, pues no se combaten por vicios propios, sino como consecuencia del analizado.

"Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia aprobada por la otrora Tercera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, visible con el número 88, en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 70, que dice:

"'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.' (transcribe texto)"

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Quinto Circuito.

Criterio. El supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, sí actualiza la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X –primera parte–, de la abrogada Ley de Amparo.

Tal criterio, derivó de lo resuelto en los juicios de amparo 1116/2012, 1050/2012 y 266/2013 (resueltos por unanimidad de votos), así como los diversos 1051/2012 y 1152/2013 (resueltos por mayoría de votos), de los que se transcribe la parte conducente:

Amparo directo laboral 1116/2012:

"OCTAVO.—De conformidad con la fracción II, párrafo último, del artículo 107 constitucional; y 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional ejerce la facultad de suplir la queja deficiente, en virtud de que el estudio integral del contradictorio evidencia que la responsable violó las normas que rigen el procedimiento, de manera que tal infracción afectó a las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo reclamado, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción X del precepto 159 de la citada ley.

"No es obstáculo para dicha conclusión, el hecho de que el impetrante de garantías no exponga argumento alguno respecto a las violaciones a las leyes del procedimiento que enseguida se analizan, porque, al tratarse de la parte obrera en el juicio del que derivan los actos reclamados, la suplencia

de la queja en su favor se actualiza aun ante la ausencia total de conceptos de violación.

"Cabe invocar en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 39/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y tres, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.'

"Los artículos 158 y 159, fracción X, de la Ley de Amparo, establecen:

"'Artículo 158.' (transcribe texto)

"'Artículo 159.' (transcribe texto)

"De los preceptos transcritos se advierte que se considerarán violadas las leyes que rigen el procedimiento, entre otros casos, cuando el tribunal responsable continúe el procedimiento después de haberse promovido una cuestión competencial, un impedimento o una recusación.

"Asimismo, se colige que para que se cometa una violación a las reglas que rigen el procedimiento que amerite el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, es indispensable que existan circunstancias que indiquen que con dichas transgresiones se irrogó perjuicio a los intereses jurídicos del impetrante, lo que debe traducirse en una afectación a sus defensas que trascienda al resultado del fallo, de tal manera que si no es así, a pesar de que exista la infracción procesal alegada, no conduce a la concesión del amparo, pues la reparación de la violación que se hubiera cometido, al carecer de trascendencia, no impactaría o influiría en el sentido en el que deba resolverse el acto que se reclama, lo que hace inútil la concesión del amparo y sólo tendría como efecto que se retarde la solución definitiva del asunto.

"En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 184, tomos 205-216, Cuarta Parte, del *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, que dice:

"'VIOLACIONES PROCESALES. CARECE DE SENTIDO ORDENAR QUE SE SUBSANEN SI NO SE AFECTARON LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO.' (transcribe texto)

"Cabe señalar que en las hipótesis jurídicas previstas por el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, debe considerarse que se violan en perjuicio de la parte agraviada las leyes que rigen el procedimiento; y que dicha violación la deja en estado de indefensión y trasciende en el resultado del fallo, no sólo por el simple hecho de que así lo prevea expresamente la ley, sino porque además, en los casos en los que una autoridad continúe conociendo de un juicio, a pesar de haber declarado que es incompetente, o que se encuentra impedida, es nulo todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación, lo que evidentemente deja en estado de indefensión a la parte afectada y trasciende al fallo definitivo que se dicte, al emitirse tales actos por una autoridad o juzgador que no contaba con los requisitos o presupuestos legales necesarios para emitirlos.

"Ahora bien, en el caso se advierte que la Junta responsable, el trece de enero de dos mil, dictó el siguiente auto: (transcribe texto)

"El juicio fue recibido por la Junta Especial Número Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, quien lo registró con el número 142/2000; y el dos de agosto de dos mil, proveyó lo siguiente: (transcribe texto)

"Por auto de ocho de julio de dos mil cinco, la Junta responsable, dictó la determinación siguiente: (transcribe texto)

"Esta última determinación es ilegal.

"Ciertamente, los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo disponen:

"'Artículo 686.' (transcribe texto)

"'Artículo 848.' (transcribe texto)

"Como se advierte del contenido de los preceptos en cita, las resoluciones dictadas por las Juntas no admiten recurso alguno y no pueden ser revocadas por las mismas, es decir, tales resoluciones causan estado en el mismo momento en el que se dictan; por tanto, si la Junta responsable, por auto de trece de enero de dos mil, se declaró incompetente para conocer de

la controversia laboral de la que derivan los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos en cita, estaba impedida legalmente para revocar tal determinación; de ahí que resulte la ilegalidad del auto de ocho de julio de dos mil cinco.

"No soslaya este Tribunal Colegiado el hecho de que la autoridad responsable, en el auto de ocho de julio de dos mil cinco, sostuvo que éste no constituía una revocación sino una regularización del procedimiento, lo que es inexacto, pues no se está en presencia de alguna omisión o irregularidad que se haya cometido en el curso del juicio, como lo sería, por ejemplo, el que no se haya emplazado a alguna de las partes o que no se hubiere proveído en relación a alguna promoción o solicitud, sino que se está ante el desconocimiento de una verdadera resolución jurisdiccional, como lo es, precisamente, la declaración de incompetencia, razón por la cual, dicha autoridad, en términos de lo que disponen los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, estaba impedida jurídicamente para desconocer el contenido y alcance del auto de trece de enero de dos mil.

"La señalada ilegalidad constituye una violación a las leyes que rigen al procedimiento laboral en términos del artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, que dejó en estado de indefensión a la parte agraviada y trascendió al resultado del fallo, pues al haberse declarado incompetente la Junta responsable por auto de trece de enero de dos mil, implicó que dicha Junta estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo que aquí se reclama, de tal manera que al no haberlo hecho así, implica la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento con posterioridad al auto aludido, incluyendo, por supuesto, el acuerdo de ocho de julio de dos mil cinco, por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado.

"Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se comparte, visible en la página número 325, Tomo XI, junio de 1993, Octava Época, del *Semanario Judicial de la Federación*, que dice:

"'VIOLACIÓN PROCESAL. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE HABERSE DECLARADO INCOMPETENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (MATERIA LABORAL).' (transcribe texto)

"En tales condiciones, ante la violación a las reglas que rigen el procedimiento, advertida de oficio por este tribunal, lo procedente es otorgar la

protección constitucional al quejoso para el efecto de que la Junta responsable declare insubsistente el laudo reclamado, así como el auto de ocho de julio de dos mil cinco, y siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, reponga el procedimiento a partir del auto en cita y continúe con el trámite de la cuestión competencial propuesta.

"No deja de advertirse por este Tribunal Colegiado, el hecho que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el análisis de las resoluciones atinentes a la competencia de los órganos jurisdiccionales, dada su afectación preponderante y superior en el procedimiento, corresponde a un Juez de Distrito, por tratarse de una violación procesal dentro del juicio cuyos efectos se consideran de imposible reparación; lo anterior según el contenido y alcance de la tesis jurisprudencial número P./J. 55/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 5, Tomo XVIII, septiembre de 2003, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que a la letra dice:

"'AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.' (transcribe texto)

"Sin embargo, la circunstancia apuntada no constituye obstáculo alguno para el sentido de la presente resolución, ya que no se está en el supuesto jurídico aludido, pues en el caso no se examina si la Junta responsable, de conformidad con los preceptos legales aplicables, es competente para conocer de la controversia laboral que le fue planteada, sino que lo que en realidad se analizó, fue la violación procesal que resultó del hecho de que la citada autoridad, a pesar de haberse declarado incompetente, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que aquí se reclama, lo que deriva en la nulidad de tales actuaciones, que es, precisamente, la hipótesis jurídica a la que se refiere el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo.

"En atención a lo expuesto, es innecesario examinar el resto de los motivos de inconformidad, con apoyo en la tesis jurisprudencial número 107, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 85, Tomo VI, del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, que a la letra dice:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.' (transcribe texto)

"Por otra parte, es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2009,

determinó que es posible, e imperativo, analizar los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto, aun en el caso de que el Tribunal Colegiado, al conocer sobre el juicio de amparo directo promovido contra un laudo, decida conceder la protección constitucional a la parte quejosa, en virtud de la existencia de una violación a las normas que rigen el procedimiento, siempre que dicha infracción adjetiva no se relacione con la cuestión principal planteada en el juicio de origen, o bien, que de no subsanarse, haría imposible emitir un pronunciamiento integral en el laudo. Lo anterior, en el entendido de que de surtirse tal hipótesis, debe constreñirse a la Junta laboral a que, además de reponer el procedimiento y reparar la violación procedimental, en la etapa correspondiente, emita un solo laudo en el que corrija, en su caso, los errores que tuvo el anterior respecto de prestaciones independientes, o bien, reiterar las consideraciones legales que no fueron materia de la concesión del amparo o que al estudiarse se estableció su constitucionalidad.

"De modo que para determinar si es posible o no entrar al estudio de los argumentos de fondo que proponga la parte quejosa, en el supuesto de haber declarado la existencia de una infracción de carácter procesal y ordenado reponer el procedimiento, el Tribunal Colegiado debe ponderar si tales argumentos dependen o no de la citada infracción adjetiva.

"La jurisprudencia relativa se localiza con el número 148/2009, en la página 67, Tomo XXX, octubre de 2009, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, y se transcribe a continuación:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL FONDO EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBEN EXAMINARSE SI NO DEPENDEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL DECLARADA FUNDADA.' (transcribe texto)

"Pues bien, este órgano de control constitucional considera que en este caso no es posible analizar el fondo del negocio del que deriva el presente juicio de amparo, pues la infracción a las normas que rigen el procedimiento que se declaró actualizada se encuentra relacionada con la validez de todo lo actuado en el juicio con posterioridad al auto de ocho de julio de dos mil cinco, actuaciones entre las que se encuentran las relativas a la contestación de la demanda, así como al ofrecimiento y admisión de pruebas, de cuyo resultado dependerá el tratamiento de la materia litigiosa.

"NOVENO.—No se analizarán los conceptos de violación expresados por Ferrocarriles Nacionales de México (en liquidación), en el juicio de amparo número 1117/2012, en virtud de que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que dispone:

"'Artículo 73.' (transcribe texto)

"En efecto, según se aprecia en el considerando que antecede, este tribunal determinó conceder la protección constitucional solicitada por Osvaldo Jordán Nicolás, contra el laudo reclamado en el presente juicio de garantías, para el efecto de que la autoridad del trabajo: (transcribe texto)

"Es decir, la concesión de la protección federal a la parte actora Osvaldo Jordán Nicolás, tiene como fin que el tribunal del trabajo declare insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento desde el auto de ocho de julio de dos mil cinco; lo que implica que los efectos del acto que aquí también se reclama han cesado y, en esa virtud, al actualizarse la causa de improcedencia que se invoca, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone:

"'Artículo 74.' (transcribe texto)

"Apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y siete, tomo sesenta y seis, Quinta Parte, Séptima Época, del *Semanario Judicial de la Federación*, que dice:

"'ACTO RECLAMADO, AMPARO IMPROCEDENTE POR CESE DE LOS EFECTOS DEL.' (transcribe texto)

"No obsta a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 'AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL SEGUNDO JUICIO DE GARANTÍAS, CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO.'; pues si bien en principio podría considerarse que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, la lectura integral del citado criterio y de la ejecutoria del que deriva, evidencian que éstos se refieren a una situación jurídica diferente, esto es, tratándose de amparos directos relacionados, que no se deciden de manera simultánea, sino que al momento de resolverse el segundo juicio de amparo, el laudo reclamado ya fue declarado insubsistente por la autoridad responsa-

ble en cumplimiento a la sentencia dictada en el primer juicio de amparo; y en el caso, como se vio, el amparo directo laboral número 1116/2012, relacionado con el presente asunto, se resuelve en este mismo acto.

"En el entendido de que tal sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos de las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud de que no fueron reclamados por vicios propios.

"Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia número 647, del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que se comparte, visible en la página 434, Tomo VI, del *Apéndice* al *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, que dice:

"'AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.' (transcribe texto)

Amparo directo laboral 1050/2012:

"QUINTO.—No se transcribirán ni analizarán las consideraciones que sustentan el laudo ni los conceptos de violación expresados en su contra, toda vez que de conformidad con la fracción II, párrafo último, del artículo 107 constitucional; y el diverso 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional ejerce la facultad de suplir la queja deficiente, en virtud de que el estudio integral del contradictorio evidencia que la responsable violó las normas que rigen el procedimiento, de manera que tal infracción afectó las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo reclamado, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción X del precepto 159 de la citada ley.

"No es obstáculo para dicha conclusión, el hecho de que el impetrante de garantías no exponga argumento alguno respecto a las violaciones a las leyes del procedimiento que enseguida se analizan, porque, al tratarse de la parte obrera en el juicio del que derivan los actos reclamados, la suplencia de la queja en su favor se actualiza aun ante la ausencia total de conceptos de violación.

"Cabe invocar, en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 39/95 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice:

"'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.' (transcribe datos de localización)

"Los artículos 158 y 159, fracción X, de la Ley de Amparo, establecen:

"'Artículo 158.' (transcribe texto)

"'Artículo 159.' (transcribe texto)

"En los preceptos transcritos se advierte que se considerarán violadas las leyes que rigen el procedimiento, entre otros casos, cuando el tribunal responsable continúe el procedimiento después de haberse promovido una cuestión competencial, un impedimento o una recusación.

"Asimismo, se colige que para que una violación a las reglas que rigen el procedimiento amerite el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, es indispensable que existan circunstancias que indiquen que con dicha transgresión se irrogó perjuicio a los intereses jurídicos del impetrante, lo que debe traducirse en una afectación a sus defensas que trascienda al resultado del fallo, de tal manera que si no es así, a pesar de que exista la infracción procesal alegada, no conduce a la concesión del amparo, pues la reparación de la violación que se hubiera cometido, al carecer de trascendencia, no impactaría o influiría en el sentido en el que deba resolverse el acto que se reclama, lo que hace inútil la concesión del amparo y sólo tendría como efecto que se retarde la solución definitiva del asunto.

"En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"'VIOLACIONES PROCESALES. CARECE DE SENTIDO ORDENAR QUE SE SUBSANEN SI NO SE AFECTARON LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO.' (transcribe texto y datos de localización)

"Cabe señalar que de conformidad con la hipótesis jurídica prevista por el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, debe considerarse que se violan en perjuicio de la parte agraviada las leyes que rigen el procedimiento; y que dicha violación la deja en estado de indefensión y trasciende en el resultado del fallo, no sólo por el simple hecho de que así lo prevea expresamente la ley, sino porque además, en los casos en los que una autoridad continúe conociendo de un juicio, a pesar de haber declarado que es incompetente, o que se encuentra impedida, es nulo todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación, lo que evidentemente deja en estado de indefensión a la parte afectada y trasciende al fallo definitivo que se dicte, al emitirse tales actos por una autoridad o juzgador que no contaba con los requisitos o presupuestos legales necesarios para emitirlos.

"Ahora bien, en el caso se advierte que en la audiencia de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el ocho de marzo de dos mil, se resolvió el incidente de competencia planteado por la demandada Ferrocarriles Nacionales de México, en los siguientes términos: (fojas sesenta y siete a setenta y uno del expediente laboral 767/1998): (transcribe texto)

"Aquí cabe aclarar que a pesar de que se ordenó la remisión del expediente a la Oficialía de Partes Común de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, en autos no obra constancia alguna en la que se advierta que se cumplió con la citada orden, así como tampoco de que el expediente en cuestión haya sido recibido por la oficialía común en cuestión.

"Sin embargo, posteriormente, se dictó la determinación siguiente (fojas setenta y dos y siguiente ibídem): (transcribe texto)

"Esta última determinación es ilegal.

"Ciertamente, los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo disponen:

"'Artículo 686.' (transcribe texto)

"'Artículo 848.' (transcribe texto)

"Como se advierte del contenido de los preceptos en cita, las resoluciones dictadas por las Juntas no admiten recurso alguno y no pueden ser revocadas por las mismas, es decir, tales resoluciones causan estado en el mismo momento en el que se dictan; por tanto, si la Junta responsable, por acuerdo de ocho de marzo de dos mil, se declaró incompetente para conocer de la controversia laboral de la que deriva el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos en cita, estaba impedida legalmente para revocar tal determinación; de ahí que resulte ilegal el auto de veintitrés de agosto de dos mil cinco.

"No soslaya este Tribunal Colegiado el hecho de que la autoridad responsable en este último auto sostuvo que éste no constituía una revocación sino una regularización del procedimiento, lo que es inexacto, pues no se está en presencia de alguna omisión o irregularidad que se haya cometido en el curso del juicio, como lo sería, por ejemplo, el que no se haya emplazado a alguna de las partes o que no se hubiere proveído en relación a alguna promoción o solicitud, sino que se está ante el desconocimiento de una verdadera

resolución judicial, como lo es, precisamente, la declaración de incompetencia, mediante inclusive de un incidente planteado en esos términos, razón por la cual, dicha autoridad de acuerdo con lo que disponen los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, estaba impedida jurídicamente para desconocer el contenido y alcance de lo resuelto en esa audiencia celebrada el ocho de marzo de dos mil.

"La anterior ilegalidad constituye una violación a las leyes que rigen al procedimiento laboral en términos del artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, que dejó en estado de indefensión a la parte agraviada y trascendió al resultado del fallo, pues al haberse declarado incompetente la Junta responsable en audiencia de ocho de marzo de dos mil, implicó que estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo que aquí se reclama, de tal manera que al no haberlo hecho así, implica la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento con posterioridad al auto aludido, incluyendo, por supuesto, el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil cinco, por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado.

"Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que a la letra dice:

"'VIOLACIÓN PROCESAL. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE HABERSE DECLARADO INCOMPETENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (MATERIA LABORAL).' (transcribe texto y datos de localización)

"En tales condiciones, ante la violación a las reglas que rigen el procedimiento, advertida de oficio por este tribunal, lo procedente es otorgar la protección constitucional al quejoso, para el efecto de que la Junta responsable declare insubsistente el laudo reclamado, así como el auto de veintitrés de agosto de dos mil cinco, y siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, reponga el procedimiento a partir del auto en cita y continúe con el trámite de la cuestión competencial propuesta.

"No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el análisis de las resoluciones atinentes a la competencia de los órganos jurisdiccionales, dada su afectación preponderante y superior en el procedimiento, corresponde a un Juez de Distrito, por tratarse de una violación procesal dentro del juicio, cuyos efectos se consideran de imposible reparación; lo anterior según el contenido y alcance de la tesis jurisprudencial número P./J. 55/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"'AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.' (transcribe texto y datos de localización)

"Sin embargo, la circunstancia apuntada no constituye obstáculo alguno para el sentido de la presente resolución, ya que no se está en el supuesto jurídico aludido, pues en el caso no se examina si la Junta responsable, de conformidad con los preceptos legales aplicables, es competente para conocer de la controversia laboral que le fue planteada, sino que lo que en realidad se analizó, fue la violación procesal que resultó del hecho de que la citada autoridad, a pesar de haberse declarado incompetente, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que aquí se reclama, lo que deriva en la nulidad de tales actuaciones, que es, precisamente, la hipótesis jurídica a la que se refiere el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo.

"Por otra parte, es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2009, determinó que es posible, e imperativo, analizar los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto, aun en el caso de que el Tribunal Colegiado, al conocer sobre el juicio de amparo directo promovido en contra de un laudo, decida conceder la protección constitucional a la parte quejosa, en virtud de la existencia de una violación a las normas que rigen el procedimiento, siempre que dicha infracción adjetiva no se relacione con la cuestión principal planteada en el juicio de origen, o bien, que de no subsanarse, haría imposible emitir un pronunciamiento integral en el laudo. Lo anterior, en el entendido de que de surtirse tal hipótesis, debe constreñirse a la Junta laboral a que, además de reponer el procedimiento y reparar la violación procedimental, en la etapa correspondiente, emita un solo laudo en el que corrija, en su caso, los errores que tuvo el anterior respecto de prestaciones independientes, o bien, reiterar las consideraciones legales que no fueron materia de la concesión del amparo o que al estudiarse se estableció su constitucionalidad.

"De modo que para determinar si es posible o no entrar al estudio de los argumentos de fondo que proponga la parte quejosa, en el supuesto de haber declarado la existencia de una infracción de carácter procesal y ordenado reponer el procedimiento, el Tribunal Colegiado debe ponderar si tales argumentos dependen o no de la citada infracción adjetiva.

"La jurisprudencia relativa se localiza con el número 148/2009, y se transcribe a continuación:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL FONDO EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBEN EXAMINARSE SI NO DEPENDEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL DECLARADA FUNDADA.' (transcribe texto y datos de localización)

"Pues bien, este órgano de control constitucional considera que en este caso no es posible analizar el fondo del negocio del que deriva el presente juicio de garantías, pues la infracción a las normas que rigen el procedimiento que se declaró actualizada, se encuentra relacionada con la validez de todo lo actuado en el juicio con posterioridad al auto de veintidós de agosto de dos mil cinco, actuaciones entre las que se encuentran las relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, de cuyo resultado dependerá el tratamiento de la materia litigiosa."

Amparo directo laboral 266/2013:

"SÉPTIMO.—En el cuarto concepto de violación la quejosa Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación delata una infracción a las normas que rigen el procedimiento laboral. Al respecto aduce que:

"- El veintiuno de febrero de dos mil la Junta responsable dictó un acuerdo en el que declaró carecer de competencia para conocer del asunto y la declinó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en México, Distrito Federal; empero, por acuerdo de cinco de agosto de dos mil cinco, determinó que sí era competente y que por ello seguiría conociendo de la controversia, e incluso dictó el laudo reclamado; determinación que infringe los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, y por vía de consecuencia, las garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues no existe precepto alguno que la faculte para revocar sus propias resoluciones.

"- Añade que si bien la responsable expresó que el acuerdo de cinco de agosto de dos mil cinco, no implicaba revocar la decisión tomada inicialmente, sino que se trataba de una simple regularización del procedimiento, en el caso esto no era así, pues la declaratoria de incompetencia constituye 'una verdadera resolución judicial'; por ende, lo decidido por la Junta afectó sus defensas y trascendió al resultado del laudo, pues al existir el impedimento delatado, no resulta válido que siguiera conociendo de la controversia, la resolviera y la condenara; de tal forma que todo lo actuado en el expediente natural debe considerarse nulo.

"- Además, manifiesta que no desconoce que las cuestiones de competencia deben resolverse por los Jueces de Distrito, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, al tratarse de actos de 'afectación preponderante y superior en el procedimiento'; no obstante, en el caso no cuestiona si la responsable es o no competente para conocer del juicio de origen,

sino que a pesar de haberse declarado incompetente continuó en el conocimiento de dicho juicio y dictó el laudo reclamado, lo cual se traduce en una infracción a las normas que rigen el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 159, fracción X, del mismo ordenamiento.

"Tales argumentos son fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada.

"En efecto, los artículos 158 y 159, fracción X, de la Ley de Amparo, establecen:

"'Artículo 158.' (transcribe texto)

"'Artículo 159.' (transcribe texto)

"En los preceptos transcritos se advierte que, se considerarán violadas las leyes que rigen el procedimiento, entre otros casos, cuando el tribunal responsable continúe el procedimiento después de haberse promovido una cuestión competencial, un impedimento o una recusación.

"Asimismo, se colige que para que una violación a las reglas que rigen el procedimiento amerite el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, es indispensable que existan circunstancias que indiquen que con dicha transgresión se irrogó perjuicio a los intereses jurídicos del agraviado, lo que debe traducirse en una afectación a sus defensas que trascienda al resultado del fallo, de tal manera que si no es así, a pesar de que exista la infracción procesal alegada, no conduce a la concesión del amparo, pues la reparación de la violación que se hubiera cometido, al carecer de trascendencia, no impactaría o influiría en el sentido en el que deba resolverse el acto que se reclama, lo que hace inútil la concesión del amparo y sólo tendría como efecto que se retarde la solución definitiva del asunto.

"En apoyo a lo anterior se cita la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"'VIOLACIONES PROCESALES. CARECE DE SENTIDO ORDENAR QUE SE SUBSANEN SI NO SE AFECTARON LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO.' (transcribe texto y datos de localización)

"Cabe señalar que de conformidad con las hipótesis jurídicas previstas por el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, debe considerarse que se violan en perjuicio de la parte agraviada las leyes que rigen el procedimiento;

y que dicha violación la deja en estado de indefensión y trasciende en el resultado del fallo, no sólo por el simple hecho de que así lo prevea expresamente la ley, sino porque además, en los casos en los que una autoridad continúe conociendo de un juicio, a pesar de haber declarado que es incompetente, o que se encuentra impedida, es nulo todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación, lo que deja en estado de indefensión a la parte afectada y trasciende al fallo definitivo que se dicte, al emitirse tales actos por una autoridad o juzgador que no contaba con los requisitos o presupuestos legales necesarios para emitirlos.

"Ahora bien, tal como lo alega el quejoso Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, en el caso se advierte que la Junta responsable, el veintiuno de febrero de dos mil, dictó el siguiente auto: (transcribe texto)

"Empero, por auto de cinco de agosto de dos mil cinco, la Junta dictó la determinación siguiente: (transcribe texto)

"Esta última determinación es ilegal.

"Ciertamente, los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo disponen:

"'Artículo 686.' (transcribe texto)

"'Artículo 848.' (transcribe texto)

"'Como se advierte del contenido de los preceptos en cita, las resoluciones dictadas por las Juntas no admiten recurso alguno y no pueden ser revocadas por las mismas, es decir, tales resoluciones causan estado en el mismo momento en el que se dictan; por tanto, si la Junta responsable, por auto de veintiuno de febrero de dos mil, se declaró incompetente para conocer de la controversia laboral de la que deriva el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos referidos, estaba impedida legalmente para revocar tal determinación; de ahí que asista razón a la patronal en cuanto a que resulte ilegal el auto de cinco de agosto de dos mil cinco.

"No soslaya este Tribunal Colegiado el hecho de que la autoridad responsable en este último auto sostuvo que éste no constituía una revocación sino una regularización del procedimiento, lo que es inexacto, como lo alega la empresa quejosa, pues no se está en presencia de alguna omisión o irregularidad que se haya cometido en el curso del juicio, como lo sería, por ejemplo, el

que no se haya emplazado a alguna de las partes o que no se hubiere proveído en relación a alguna promoción o solicitud, sino que se está ante el desconocimiento de una verdadera resolución judicial, como lo es, precisamente, la declaración de incompetencia, razón por la cual, dicha autoridad, en términos de lo que disponen los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, estaba impedida jurídicamente para desconocer el contenido y alcance del auto de veintiuno de febrero de dos mil.

"La anterior ilegalidad, constituye una violación a las leyes que rigen al procedimiento laboral en términos del artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, que dejó en estado de indefensión a la empresa inconforme, tal como ésta lo hace valer, y trascendió al resultado del fallo, pues al haberse declarado incompetente la Junta responsable por auto de veintiuno de febrero de dos mil, implicó que estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo que aquí se reclama, de tal manera que esto conlleva la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento con posterioridad al auto mencionado, incluyendo, por supuesto, el acuerdo de cinco de agosto de dos mil cinco, por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado.

"Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que a la letra dice:

"'VIOLACIÓN PROCESAL. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE HABERSE DECLARADO INCOMPETENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (MATERIA LABORAL).' (transcribe texto y datos de localización)

"En tales condiciones, ante la violación a las reglas que rigen el procedimiento, analizada por este tribunal en atención a los argumentos formulados por Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, en el concepto de violación denominado 'cuarto', lo procedente es otorgarle a aquélla la protección constitucional que solicita, para el efecto de que la Junta responsable declare insubsistente el laudo reclamado, así como el auto de cinco de agosto de dos mil cinco, y siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, reponga el procedimiento a partir del auto en cita y continúe con el trámite de la cuestión competencial propuesta.

"La concesión del amparo debe hacerse extensiva por lo que ve a los actos de ejecución reclamados al presidente y actuario ejecutor adscritos a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje,

toda vez que al haber resultado violatorio de derechos el laudo reclamado, lo mismo sucede con su ejecución. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 102, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y seis, del último *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación*, Tomo VI, materia común, que dice:

"'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.' (transcribe texto)

"No deja de advertirse por este Tribunal Colegiado, el hecho de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el análisis de las resoluciones atinentes a la competencia de los órganos jurisdiccionales, dada su afectación preponderante y superior en el procedimiento, corresponde a un Juez de Distrito, por tratarse de una violación procesal dentro del juicio, cuyos efectos se consideran de imposible reparación; lo anterior según el contenido y alcance de la tesis jurisprudencial número P./J. 55/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"'AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.' (transcribe texto y datos de localización)

"No obstante, la circunstancia apuntada no constituye obstáculo alguno para el sentido de la presente resolución, ya que no se está en el supuesto jurídico aludido, pues en el caso no se examina si la Junta responsable, de conformidad con los preceptos legales aplicables, es competente para conocer de la controversia laboral que le fue planteada, sino que lo que en realidad se analizó, fue la violación procesal que resultó del hecho de que la citada autoridad, a pesar de haberse declarado incompetente, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que aquí se reclama, lo que deriva en la nulidad de tales actuaciones, que es, precisamente, la hipótesis jurídica a la que se refiere el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo.

"Tampoco es obstáculo para la concesión del amparo, que la ahora quejosa no hubiera promovido juicio de amparo, en contra de los anteriores laudos de diez de noviembre de dos mil nueve, diez de agosto de dos mil diez y veinticuatro de mayo de dos mil doce, en el que hiciera valer la violación a las normas que rigen el procedimiento materia de esta ejecutoria; pues esa circunstancia no implica que tal infracción se considere consentida, en tanto que ésta no le ocasionó perjuicio a la referida quejosa en dichas ocasiones,

ya que en los laudos señalados, la Junta la absolvió del pago de todas las prestaciones reclamadas.

"Por otra parte, es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2009, determinó que es posible, e imperativo, analizar los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto, aun en el caso de que el Tribunal Colegiado, al conocer sobre el juicio de amparo directo promovido en contra de un laudo, decida conceder la protección constitucional a la parte quejosa, en virtud de la existencia de una violación a las normas que rigen el procedimiento, siempre que dicha infracción adjetiva no se relacione con la cuestión principal planteada en el juicio de origen, o bien, que de no subsanarse, haría imposible emitir un pronunciamiento integral en el laudo. Lo anterior, en el entendido de que de surtirse tal hipótesis, debe constreñirse a la Junta laboral a que, además de reponer el procedimiento y reparar la violación procedimental, en la etapa correspondiente, emita un solo laudo en el que corrija, en su caso, los errores que tuvo el anterior respecto de prestaciones independientes, o bien, reiterar las consideraciones legales que no fueron materia de la concesión del amparo o que al estudiarse se estableció su constitucionalidad.

"De modo que para determinar si es posible o no entrar al estudio de los argumentos de fondo que proponga la parte quejosa, en el supuesto de haber declarado la existencia de una infracción de carácter procesal y ordenado reponer el procedimiento, el Tribunal Colegiado debe ponderar si tales argumentos dependen o no de la citada infracción adjetiva.

"La jurisprudencia relativa se localiza con el número 148/2009, en la página 67, Tomo XXX, octubre de 2009, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, y se transcribe a continuación:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL FONDO EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBEN EXAMINARSE SI NO DEPENDEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL DECLARADA FUNDADA.' (transcribe texto)

"Pues bien, este órgano de control constitucional considera que en este caso, no es posible analizar los demás conceptos de violación expresados por la empresa quejosa, pues la infracción a las normas que rigen el procedimiento que se declaró actualizada, se encuentra relacionada con la validez de todo lo actuado en el juicio con posterioridad al auto de cinco de agosto de dos mil cinco, actuaciones entre las que se encuentran las rela-

tivas a la contestación de la demanda, la admisión y desahogo de pruebas, de cuyo resultado dependerá el tratamiento de la materia litigiosa; así como el propio laudo reclamado."

Amparo directo laboral 1051/2012:

"CUARTO.—No se transcribirán ni analizarán las consideraciones que sustentan el laudo ni los conceptos de violación expresados en su contra, toda vez que de conformidad con la fracción II, párrafo último, del artículo 107 constitucional; y 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo aplicable, este órgano de control constitucional, ejerce la facultad de suplir la queja deficiente, en virtud de que el estudio integral del contradictorio evidencia que la responsable violó las normas que rigen el procedimiento, de manera que tal infracción afectó las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo reclamado, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción X del precepto 159 de la citada ley.[3]

"No es obstáculo para dicha conclusión, el hecho de que el solicitante de la tutela constitucional no exponga argumento alguno respecto a las violaciones a las leyes del procedimiento que enseguida se analizan, porque, al tratarse de la parte obrera en el juicio del que derivan los actos reclamados, la suplencia de la queja en su favor se actualiza aun ante la ausencia total de conceptos de violación.

"Cabe invocar en apoyo la jurisprudencia 2a./J. 39/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice:

"'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.' (cita datos de localización)

"Los artículos 158 y 159, fracción X, de la mencionada ley, establecen:

"'Artículo 158.' (transcribe texto)

"'Artículo 159.' (transcribe texto)

"En los preceptos transcritos se advierte que se considerarán violadas las leyes que rigen el procedimiento, entre otros casos, cuando el tribunal

[3] En términos similares se resolvieron los amparos directos laborales 243/2012, 244/2012 y 705/2012.

responsable continúe el procedimiento después de haberse promovido una cuestión competencial, un impedimento o una recusación.

"Asimismo, se colige que para que una violación a las reglas que rigen el procedimiento amerite el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, es indispensable que existan circunstancias que indiquen que con dicha transgresión se irrogó perjuicio a los intereses jurídicos del agraviado, lo que debe traducirse en una afectación a sus defensas que trasciende al resultado del fallo, de tal manera que si no es así, a pesar de que exista la infracción procesal alegada, no conduce a la concesión del amparo, pues la reparación de la violación que se hubiera cometido, al carecer de trascendencia, no impactaría o influiría en el sentido en el que deba resolverse el acto que se reclama, lo que hace inútil la concesión del amparo y sólo tendría como efecto que se retarde la solución definitiva del asunto.

"En apoyo a lo anterior se cita la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"'VIOLACIONES PROCESALES. CARECE DE SENTIDO ORDENAR QUE SE SUBSANEN SI NO SE AFECTARON LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO.' (transcribe texto y datos de localización)

"Cabe señalar que de conformidad con las hipótesis jurídicas previstas por el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, debe considerarse que se violan en perjuicio de la parte agraviada las leyes que rigen el procedimiento; y que dicha violación la deja en estado de indefensión, y trasciende en el resultado del fallo, no sólo por el simple hecho de que así lo prevea expresamente la ley, sino porque además, en los casos en los que una autoridad continúe conociendo de un juicio, a pesar de haber declarado que es incompetente, o que se encuentra impedida, es nulo todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación, lo que deja en estado de indefensión a la parte afectada y trasciende al fallo definitivo que se dicte, al emitirse tales actos por una autoridad o juzgador que no contaba con los requisitos o presupuestos legales necesarios para emitirlos.

"Ahora bien, en el caso se advierte que la Junta responsable, el once de abril de dos mil, dictó el siguiente auto:(transcribe texto)

"Empero, por auto de veintidós de agosto de dos mil cinco, la Junta dictó la determinación siguiente: (transcribe texto)

"Esta última determinación es ilegal.

"Ciertamente, los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo disponen:

"'Artículo 686.' (transcribe texto)

"'Artículo 848.' (transcribe texto)

"Como se advierte del contenido de los preceptos en cita, las resoluciones dictadas por las Juntas no admiten recurso alguno y no pueden ser revocadas por las mismas, es decir, tales resoluciones causan estado en el mismo momento en el que se dictan; por tanto, si la Junta responsable, por auto de once de abril de dos mil, se declaró incompetente para conocer de la controversia laboral de la que deriva el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos referidos, estaba impedida legalmente para revocar tal determinación; de ahí que resulte ilegal el auto de veintidós de agosto de dos mil cinco.

"No soslaya este Tribunal Colegiado, el hecho de que la autoridad responsable en este último auto sostuvo que éste no constituía una revocación sino una regularización del procedimiento, lo que es inexacto, pues no se está en presencia de alguna omisión o irregularidad que se haya cometido en el curso del juicio, como lo sería, por ejemplo, el que no se haya emplazado a alguna de las partes o que no se hubiere proveído en relación a alguna promoción o solicitud, sino que se está ante el desconocimiento de una verdadera resolución judicial, como es, precisamente, la declaración de incompetencia, razón por la cual, dicha autoridad, en términos de lo que disponen los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, estaba impedida jurídicamente para desconocer el contenido y alcance del auto de once de abril de dos mil.

"La anterior ilegalidad constituye una violación a las leyes que rigen al procedimiento laboral en términos del artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, que dejó en estado de indefensión a ambos agraviados y trascendió al resultado del fallo, pues al haberse declarado incompetente la Junta responsable por auto de once de abril de dos mil, implicó que estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo que aquí se reclama, de tal manera que al no haberlo hecho así, esto conlleva la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento con posterioridad al auto aludido, incluyendo, por supuesto, el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil cinco, por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado.

"Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que a la letra dice:

"'VIOLACIÓN PROCESAL. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE HABERSE DECLARADO INCOMPETENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (MATERIA LABORAL).' (transcribe texto y datos de localización)

"En tales condiciones, ante la violación a las reglas que rigen el procedimiento, invocada de oficio por este tribunal, lo procedente es otorgar la protección constitucional, para el efecto de que la Junta responsable declare insubsistente el laudo reclamado, así como el auto de veintidós de agosto de dos mil cinco, y siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, reponga el procedimiento a partir del auto en cita y continúe con el trámite de la cuestión competencial propuesta.

"No deja de advertirse por este Tribunal Colegiado, el hecho de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, el análisis de las resoluciones atinentes a la competencia de los órganos jurisdiccionales, dada su afectación preponderante y superior en el procedimiento, corresponde a un Juez de Distrito, por tratarse de una violación procesal dentro del juicio, cuyos efectos se consideran de imposible reparación; lo anterior según el contenido y alcance de la tesis jurisprudencial número P./J. 55/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"'AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.' (transcribe texto y datos de localización)

"No obstante, la circunstancia apuntada no constituye obstáculo alguno para el sentido de la presente resolución, ya que no se está en el supuesto jurídico aludido, pues en el caso no se examina si la Junta responsable, de conformidad con los preceptos legales aplicables, es competente para conocer de la controversia laboral que le fue planteada, sino que lo que en realidad se analizó, fue la violación procesal que resultó del hecho de que la citada autoridad, a pesar de haberse declarado incompetente, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que aquí se reclama, lo que deriva en la nulidad de tales actuaciones, que es, precisamente, la hipótesis jurídica a la que se refiere el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo en cita.

"Por otra parte, es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2009, determinó que es posible, e imperativo, analizar los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto, aun en el caso de que el Tribunal Colegiado, al conocer sobre el juicio de amparo directo promovido contra un laudo,

decida conceder la protección constitucional a la parte quejosa, en virtud de la existencia de una violación a las normas que rigen el procedimiento, siempre que dicha infracción adjetiva no se relacione con la cuestión principal planteada en el juicio de origen, o bien, que de no subsanarse, haría imposible emitir un pronunciamiento integral en el laudo. Lo anterior, en el entendido de que de surtirse tal hipótesis, debe constreñirse a la Junta laboral a que, además de reponer el procedimiento y reparar la violación procedimental, en la etapa correspondiente, emita un solo laudo en el que corrija, en su caso, los errores que tuvo el anterior respecto de prestaciones independientes, o bien, reiterar las consideraciones legales que no fueron materia de la concesión del amparo o que al estudiarse se estableció su constitucionalidad.

"De modo que para determinar si es posible o no entrar al estudio de los argumentos de fondo que proponga la parte quejosa, en el supuesto de haber declarado la existencia de una infracción de carácter procesal y ordenado reponer el procedimiento, el Tribunal Colegiado debe ponderar si tales argumentos dependen o no de la citada infracción adjetiva.

"La jurisprudencia relativa se localiza con el número 148/2009, y se transcribe a continuación:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL FONDO EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBEN EXAMINARSE SI NO DEPENDEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL DECLARADA FUNDADA.' (transcribe texto y datos de localización)

"Pues bien, este órgano de control constitucional considera que en este caso no es posible analizar el fondo del negocio del que derivan los presentes juicios de amparo, pues la infracción a las normas que rigen el procedimiento que se declaró actualizada, se encuentra relacionada con la validez de todo lo actuado en el juicio con posterioridad al auto de veintidós de agosto de dos mil cinco, actuaciones entre las que se encuentran las relativas al ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, de cuyo resultado dependerá el tratamiento de la materia litigiosa."

Amparo directo laboral 1152/2013:

"SEXTO.—No serán materia de análisis el laudo reclamado, ni los conceptos de violación expresados en su contra, en virtud de que este órgano colegiado advierte que la Junta laboral incurrió en una violación a las normas que rigen el procedimiento.

"En efecto, de conformidad con la fracción II, párrafo último, del artículo 107 constitucional; y 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional ejerce la facultad de suplir la queja deficiente, en virtud de que el estudio integral del contradictorio evidencia que la responsable violó las normas que rigen el procedimiento, de manera que tal infracción afectó a las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo reclamado, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción X del precepto 159 de la citada ley.

"No es obstáculo para dicha conclusión, el hecho de que el impetrante del amparo no exponga argumento alguno respecto a la violación a las leyes del procedimiento que enseguida se analizan, porque, al tratarse de la parte obrera en el juicio del que deriva el acto reclamado, la suplencia de la queja en su favor se actualiza aun ante la ausencia total de conceptos de violación.

"Cabe invocar en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 39/95 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 333, Tomo II, septiembre de 1995, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, cuyo rubro es: 'SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.'

"En efecto, los artículos 158 y 159, fracción X, de la Ley de Amparo, establecen:

"'Artículo 158.' (transcribe texto)

"'Artículo 159.' (transcribe texto)

"En los preceptos transcritos se advierte que, se considerarán violadas las leyes que rigen el procedimiento, entre otros casos, cuando el tribunal responsable continúe el procedimiento después de haberse promovido una cuestión competencial, un impedimento o una recusación.

"Asimismo, se colige que para que se cometa una violación a las reglas que rigen el procedimiento que amerite el otorgamiento de la protección constitucional solicitada, es indispensable que existan circunstancias que indiquen que con dichas transgresiones se irrogó perjuicio a los intereses jurídicos del impetrante, lo que debe traducirse en una afectación a sus defensas que trascienda al resultado del fallo, de tal manera que si no es así, a pesar de que exista la infracción procesal alegada, no conduce a la concesión del amparo, pues la reparación de la violación que se hubiera cometido, al care-

cer de trascendencia, no impactaría o influiría en el sentido en el que deba resolverse el acto que se reclama, lo que hace inútil la concesión del amparo y sólo tendría como efecto que se retarde la solución definitiva del asunto.

"En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 184, tomos 205-216, Cuarta Parte, del *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, que dice:

"'VIOLACIONES PROCESALES. CARECE DE SENTIDO ORDENAR QUE SE SUBSANEN SI NO SE AFECTARON LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO.' (transcribe texto)

"Cabe señalar que en las hipótesis jurídicas previstas por el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, debe considerarse que se violan en perjuicio de la parte agraviada las leyes que rigen el procedimiento; y que dicha violación la deja en estado de indefensión y trasciende en el resultado del fallo, no sólo por el simple hecho de que así lo prevea expresamente la ley, sino porque además, en los casos en los que una autoridad continúe conociendo de un juicio, a pesar de haber declarado que es incompetente, o que se encuentra impedida, es nulo todo lo actuado con posterioridad a dicha determinación, lo que evidentemente deja en estado de indefensión a la parte afectada y trasciende al fallo definitivo que se dicte, al emitirse tales actos por una autoridad o juzgador que no contaba con los requisitos o presupuestos legales necesarios.

"Ahora bien, en el caso, se advierte que la Junta responsable, el veintiuno de febrero del año dos mil, dictó el siguiente auto (folio diez del expediente laboral): (transcribe texto)

"Por auto de treinta de mayo de dos mil, la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en México, Distrito Federal, tuvo por recibidos los autos del expediente laboral 1430/1999 y ordenó la devolución de éstos a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, para el efecto de que notificara a las partes el aspecto inherente a la incompetencia legal decretada por la autoridad laboral citada en último término (folio once ibídem).

"El doce de febrero de dos mil uno, la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, recibió los autos y ordenó notificar a las partes el aspecto inherente a la incompetencia legal decretada por la citada autoridad (folio doce ibídem).

"El cinco de agosto de dos mil cinco, la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dictó diverso proveído que a la letra dice (fojas dieciséis y diecisiete ibídem): (transcribe texto)

"Esta última determinación es ilegal.

"Ciertamente, los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo disponen:

"'Artículo 686.' (transcribe texto)

"'Artículo 848.' (transcribe texto)

"Como se advierte del contenido de los preceptos en cita, las resoluciones dictadas por las Juntas no admiten recurso alguno y no pueden ser revocadas por las mismas, es decir, tales resoluciones causan estado en el momento en el que se dictan; por tanto, si la Junta responsable, por auto de veintiuno de febrero de dos mil, se declaró legalmente incompetente para conocer de la controversia laboral de la que derivan los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos en cita; resulta evidente que estaba impedida legalmente para revocar tal determinación; de ahí que resulte ilegal el auto de cinco de agosto de dos mil cinco.

"No soslaya este Tribunal Colegiado, que la autoridad responsable en este último auto sostuvo que el criterio externado no constituía una revocación sino una regularización del procedimiento, lo que es inexacto, pues no se está en presencia de alguna omisión o irregularidad que se haya cometido en el curso del juicio, como lo sería, por ejemplo, el que no se hubiese emplazado a alguna de las partes o que no se hubiera proveído en relación a alguna promoción o solicitud, sino que se está ante el desconocimiento de una verdadera resolución judicial, como lo es, precisamente, la declaración de incompetencia; razón por la cual, dicha autoridad, en términos de lo que disponen los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, estaba impedida jurídicamente para desconocer el contenido y alcance del auto de veintiuno de febrero de dos mil.

"La anterior determinación, constituye una violación a las leyes que rigen al procedimiento laboral en términos del artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, que dejó en estado de indefensión a la parte agraviada y trascendió al resultado del fallo, pues al haberse declarado incompetente la Junta responsable por auto de veintiuno de febrero de dos mil, implicó que dicha

Junta estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo que aquí se reclama, de tal manera que al haber actuado así, generó la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento con posterioridad al auto aludido, incluyendo, por supuesto, el acuerdo de cinco de agosto de dos mil cinco, por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado.

"Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página número 325, Tomo XI, junio de 1993, del *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, que a la letra dice:

"'VIOLACIÓN PROCESAL. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE HABERSE DECLARADO INCOMPETENTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (MATERIA LABORAL).' (transcribe texto)

"Lo anterior, con independencia de las razones por las cuales la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que debía seguir conociendo del asunto (entre otras, que: 'actuar de manera contraria a lo razonado, transgrediría los principios de economía y sencillez en el proceso, contenidos en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo …'), toda vez que al margen de lo razonado, lo cierto es, que con anterioridad ya había emitido una determinación irrevocable por ella misma, atinente a la falta de competencia legal para dar trámite y resolver la controversia a su consideración, por lo que dicha circunstancia le impedía analizar con posterioridad los motivos legales por los cuales tal competencia sí podía sostenerse, al encontrarse inconclusa la cuestión competencial en cita. Circunstancia que es suficiente para tener por actualizada la hipótesis contenida en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, pues ésta establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento: (transcribe texto).

"En tales condiciones, ante la violación a las reglas que rigen el procedimiento, advertida de oficio por este tribunal, lo procedente es otorgar la protección constitucional al quejoso para el efecto de que la Junta responsable declare insubsistente el laudo reclamado, así como el auto de cinco de agosto de dos mil cinco, y siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, reponga el procedimiento a partir del auto en cita y continúe con el trámite de la cuestión competencial propuesta.

"No deja de advertirse por este Tribunal Colegiado, el hecho que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el análisis de las resoluciones atinentes a la competencia de los órganos jurisdiccionales, dada su afectación preponderante y superior en el proce-

dimiento, corresponde a un Juez de Distrito, por tratarse de una violación procesal dentro del juicio cuyos efectos se consideran de imposible reparación; lo anterior, según el contenido y alcance de la tesis jurisprudencial número P./J. 55/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 5, Tomo XVIII, septiembre de 2003, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que a la letra dice:

"'AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.' (transcribe texto)

"Sin embargo, la circunstancia apuntada no constituye obstáculo para el sentido de la presente resolución, ya que no se está en ese supuesto jurídico, pues en el caso no se examina si la Junta responsable, de conformidad con los preceptos legales aplicables, es competente para conocer de la controversia laboral que le fue planteada, sino que lo que en realidad se analizó, fue el hecho de que la citada autoridad, a pesar de haberse declarado incompetente, revocó esta decisión, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo reclamado, lo que da lugar al surtimiento, precisamente, de la hipótesis jurídica a la que se refiere el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo.

"Por otra parte, es pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2009, determinó que es posible e imperativo, analizar los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto, aun en el caso de que el Tribunal Colegiado, al conocer sobre el juicio de amparo directo promovido contra un laudo, decida conceder la protección constitucional a la parte quejosa, en virtud de la existencia de una violación a las normas que rigen el procedimiento, siempre que dicha infracción adjetiva no se relacione con la cuestión principal planteada en el juicio de origen, o bien, que de no subsanarse, haría imposible emitir un pronunciamiento integral en el laudo. Lo anterior, en el entendido de que de surtirse tal hipótesis, debe constreñirse a la Junta laboral a que, además de reponer el procedimiento y reparar la violación procedimental, en la etapa correspondiente, emita un solo laudo en el que corrija, en su caso, los errores que tuvo el anterior respecto de prestaciones independientes, o bien, reiterar las consideraciones legales que no fueron materia de la concesión del amparo o que al estudiarse se estableció su constitucionalidad.

"De modo que para determinar si es posible o no entrar al estudio de los argumentos de fondo que proponga la parte quejosa, en el supuesto de haber declarado la existencia de una infracción de carácter procesal y ordenado

reponer el procedimiento, el Tribunal Colegiado debe ponderar si tales argumentos dependen o no de la citada infracción adjetiva.

"La jurisprudencia relativa se localiza con el número 148/2009, en la página 67, Tomo XXX, octubre de 2009, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, y se transcribe a continuación:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL FONDO EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBEN EXAMINARSE SI NO DEPENDEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL DECLARADA FUNDADA.' (transcribe texto)

"Empero, este órgano de control constitucional considera que en este caso no es posible analizar el fondo del negocio del que deriva el presente juicio de amparo, pues la infracción a las normas que rigen el procedimiento que se declaró actualizada, se encuentra relacionada con la validez de todo lo actuado en el juicio con posterioridad al auto de cinco de agosto de dos mil cinco, actuaciones entre las que se encuentran las relativas a la contestación de la demanda, así como al ofrecimiento y admisión de pruebas, de cuyo resultado dependerá el tratamiento de la materia litigiosa."

QUINTO.—**Existencia de la contradicción.**

Sí existe la contradicción de tesis que se denuncia.

En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, estableció que la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el propio Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",[4] criterio que fue interrumpido.

En la ejecutoria que dio lugar a tal interrupción, dicho Tribunal Pleno razonó, que si conforme a ese criterio uno de los requisitos que condicionan la existencia de las contradicciones de tesis consiste en que "**al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes**" y,

[4] Publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76.

además, "**los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos**" –quedando esto sujeto a su interpretación, lo que en muchos casos se refiere a diferencias fácticas–, resulta que el número de contradicciones que se resolverán podría disminuir significativamente, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. Aunado a que la práctica judicial revela que son muy escasos los asuntos en que se reúnen los tres requisitos precisados en la aludida jurisprudencia.

También puntualizó que la jurisprudencia tiene como propósito, entre otros, eliminar la incertidumbre que se genera cuando en el mundo fáctico se dan conflictos derivados de situaciones jurídicas confusas. Casos en los cuales es muy importante fijar una jurisprudencia, con el objeto de eliminar esa confusión y dotar así de seguridad jurídica al sistema. Y que generalmente las cuestiones fácticas en dos o más asuntos no son exactamente iguales, sin embargo, después de analizar tales cuestiones los juzgadores ordinariamente extraen criterios jurídicos abstractos que resultan aplicables a otros casos similares. Lo que demuestra que las distintas cuestiones fácticas permiten extraer un mismo criterio jurídico. Siendo así como puede válidamente generarse una contradicción de tesis –es decir, criterios jurídicos que se oponen– a partir de cuestiones fácticas disímiles.

Así, concluyó que los elementos que condicionan la existencia de las contradicciones de tesis no son los que se establecen en la jurisprudencia interrumpida, sino que **tal existencia deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, esto es, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas**. Criterio congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que éstas cumplan el propósito para el que fueron creadas y no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

Consecuentemente, sustentó la tesis que interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, del tenor siguiente:

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Tipo de Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXXII, agosto de 2010
"Materia: común

"Tesis: P./J. 72/2010
"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica

que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Luego, en la propia ejecutoria, el Tribunal Pleno estableció que pese a la diversidad de los hechos sentenciados o a la variedad de las normas aplicadas, si en lo esencial las ejecutorias contienen decisiones opuestas, debe preferirse acometer su estudio, y no declararse simplemente la inexistencia formal de la contradicción, pues la inseguridad jurídica que provocaría la permanencia de las ejecutorias disímiles debe ser disuelta mediante la jurisprudencia respectiva, la que, en todo caso, podrá explicar la sistemática con la que, en un futuro, deberán ser acometidos los problemas particulares analizados en los respectivos fallos. De otra manera, si tales contradicciones se llegaran a declarar inexistentes, porque las ejecutorias que las integraron partieron de elementos secundarios o accesorios diversos, el formalismo excesivo de esta manera de proceder, aunado a la falta de publicidad de este tipo de resoluciones, dejaría en pie el problema inicialmente planteado, porque si bien para ese Alto Tribunal habría quedado en claro que, analizado el asunto con exquisita finura, la contraposición de criterios era tan sólo aparente, la mayoría de las personas ignorarían los pormenores de esta determinación y prevalecería la incertidumbre de saber cuál de las conclusiones torales de las sentencias era la correcta.

Bajo estas nuevas reflexiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interrumpir su jurisprudencia P./J. 26/2001, sintetizó el alcance de tal medida de la siguiente forma:

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Tesis: aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXX, julio de 2009
"Materia: común
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

El anterior marco de referencia sirve de base para establecer la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia, dado que, como se expondrá, los órganos jurisdiccionales contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un problema jurídico central perfectamente identificable, que amerita ser resuelto, en aras de la certidumbre en las decisiones judiciales, a que se alude en los invocados criterios del Pleno del Alto Tribunal, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodearon dicho problema no sean exactamente iguales, así como de las diferencias en los elementos accesorios o secundarios que precedan a las ejecutorias respectivas.

En efecto, como se corrobora de las ejecutorias previamente transcritas, el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, en los juicios de amparo materia de la presente contradicción, adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un problema jurídico central perfectamente identificable:

Si el supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, actualiza o no la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X –primera parte–, de la abrogada Ley de Amparo.

Es así, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, en la ejecutoria que emitió en el juicio de amparo directo laboral 858/2011, razonó esencialmente en los términos siguientes:

- En el noveno concepto de queja la impetrante adujo que una violación procesal resultó del hecho de que la responsable, a pesar de haberse declarado incompetente, en un determinado acuerdo, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo impugnado; aun cuando mediante un diverso auto, con infracción a los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, haya revocado aquel acuerdo.

- Disenso inoperante, pues si bien la quejosa precisó que lo que está impugnando, como violación procesal, no es si la Junta es o no competente para conocer de la controversia planteada, sino que "*a pesar de haberse declarado incompetente, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que se impugna por la presente vía*", lo que encuadra en la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo; lo cierto es que la responsable no siguió conociendo del juicio después de haberse declarado incompetente para ello, como se establece en dicha hipótesis.

- Lo anterior, pues de autos se advierte que con posterioridad a tal declaratoria, con el estado procesal de los autos y las razones y fundamentos legales que expuso en un diverso acuerdo, determinó que no existía razón alguna para declinar su competencia, por lo que se declaró competente para conocer del juicio laboral, precisando que ello no constituía una revocación de una determinación tomada, sino una regularización, a efecto de corregir un error, en términos del artículo 686, segundo párrafo, de la ley laboral. Enseguida, decretó la continuación del procedimiento, fijando fecha y hora para la audiencia de

conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, con citación de las partes, para después seguir el juicio hasta el dictado del laudo.

- En tal virtud, si bien con motivo de una declaratoria de incompetencia la Junta deja de tener jurisdicción para seguir conociendo del juicio laboral, en el caso, aun cuando realizó esa declaratoria y remitió el expediente a la Junta que estimó competente para ello, posteriormente a que se le devolvió, por no encontrarse notificadas las partes ni encontrarse firme tal declaratoria, no mantuvo esa incompetencia, por el contrario, decretó en diverso acuerdo, que no existía ninguna razón para declinar su incompetencia.

- Por tanto, no es verdad que la Junta responsable, después de declararse incompetente haya continuado con el conocimiento del juicio y dictado el laudo impugnado, ya que para ello medió el multicitado auto, en el que sostuvo su competencia jurisdiccional, de ahí que no se actualiza la violación procesal contemplada en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, relativa a que el tribunal del trabajo continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia.

- Sin que al respecto se pase por alto la alegación de la quejosa, en el sentido de que la responsable, con el dictado del segundo de los referidos acuerdos, revocó, con infracción a los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, el primero de ellos; sin embargo, al no encontrarse contemplado ese caso como violación procesal, en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ni estimarse análogo a los ahí previstos, la impetrante debió combatirlo, de así considerarlo pertinente, a través del juicio de amparo indirecto y no como violación procesal en el amparo directo.

En esos términos, fue que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, sobre el problema jurídico central destacado, adoptó este criterio:

El supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, no actualiza la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X –primera parte–, de la abrogada Ley de Amparo.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, en las ejecutorias que emitió en los juicios de amparo

directo laborales 1116/2012, 1050/2012, 266/2013, 1051/2012 y 1152/2013, razonó esencialmente como sigue:

- De conformidad con las hipótesis jurídicas previstas por el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, se violan en perjuicio de la parte agraviada las leyes que rigen el procedimiento; que dicha violación deja en estado de indefensión y trasciende al resultado del fallo, no sólo porque así lo prevea expresamente la ley, sino porque en los casos en que una autoridad continúe conociendo de un juicio, a pesar de haber declarado su incompetencia, o que se encuentra impedida, es nulo todo lo actuado con posterioridad, lo que deja en estado de indefensión a la parte afectada y trasciende al fallo definitivo, al emitirse actos por una autoridad o juzgador que no contaba con los requisitos o presupuestos legales necesarios para emitirlos.

- De los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo se advierte, que las resoluciones dictadas por las Juntas no admiten recurso alguno y no pueden ser revocadas por las mismas, es decir, causan estado en el mismo momento en que se dictan, por lo que si la Junta responsable, en un determinado auto, se declaró incompetente para conocer de la controversia laboral de la que derivó el acto reclamado, estaba impedida legalmente para revocar tal determinación, por lo que era ilegal el auto posterior.

- Es inexacto el argumento que sostuvo dicha autoridad en este último proveído, de que ello constituía una regularización del procedimiento, pues no se está en presencia de alguna omisión o irregularidad cometida en el curso del juicio, sino ante el desconocimiento de una verdadera resolución judicial, como la declaración de incompetencia, por lo que, en términos de los artículos 686 y 848 citados, estaba impedida para desconocer el contenido y alcance del referido auto.

- Ilegalidad que constituía una violación a las leyes del procedimiento laboral, en términos del artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, que dejó en estado de indefensión a la quejosa y trascendió al resultado del fallo, pues al haberse declarado incompetente la Junta responsable, implicó que estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo reclamado, lo que conlleva a la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento, con posterioridad al mencionado auto, incluyendo, por supuesto, el acuerdo por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado.

- Ante tal violación a las leyes del procedimiento, procede conceder a la quejosa el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable

declare insubsistente el laudo reclamado, así como el auto en donde se volvió a declarar competente, y siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, reponga el procedimiento, a partir del auto en cita y continúe con el trámite de la cuestión competencial propuesta.

- No se inadvierte que de conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el análisis de las resoluciones atinentes a la competencia de los órganos jurisdiccionales, dada su afectación preponderante y superior en el procedimiento, corresponde a un Juez de Distrito, por tratarse de una violación procesal dentro del juicio, cuyos efectos eran de imposible reparación; sin embargo, en el caso no se examina si la Junta responsable es competente para conocer de la controversia laboral planteada, sino la violación procesal que resultó del hecho de que la citada autoridad, a pesar de haberse declarado incompetente, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo reclamado, lo que derivó en la nulidad de tales actuaciones, hipótesis a que se refiere el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo.

En esos términos, fue que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, sobre el problema jurídico central destacado, adoptó este criterio:

El supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, sí actualiza la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X –primera parte–, de la abrogada Ley de Amparo.

De todo lo cual se corrobora lo antes afirmado, en el sentido de que los órganos jurisdiccionales contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un problema jurídico central perfectamente identificable, que amerita ser resuelto, en aras de la certidumbre en las decisiones judiciales, a que se alude en los invocados criterios del Pleno del Alto Tribunal.

Esto, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodearon dicho problema no sean exactamente iguales, así como de las diferencias en los elementos accesorios o secundarios que precedan a las ejecutorias respectivas, pues no se desconoce que de las ejecutorias de que se habla, se advierte lo siguiente:

a) Los juicios de amparo directo laborales 1116/2012, 1050/2012, 1051/2012 y 1152/2013, del índice del citado Segundo Tribunal Colegiado, fue-

ron promovidos por la parte actora en el juicio natural –trabajador– y la violación procesal que a juicio de dicho órgano colegiado se actualizó, fue invocada de oficio, en suplencia de la queja deficiente. En cambio, el juicio de amparo directo laboral 266/2013, del índice del propio tribunal, fue promovido por el demandado en el juicio natural –Ferrocarriles Nacionales de México–, quien hizo valer tal violación como concepto de violación.

El juicio de amparo directo laboral 858/2011, del índice del citado Primer Tribunal Colegiado, fue también promovido por el demandado en el juicio natural –Ferrocarriles Nacionales de México–, quien igualmente hizo valer tal violación como concepto de violación.

b) Según lo asentado en las ejecutorias respectivas, en los expedientes naturales, de los que derivaron los juicios de amparo directo laborales 1116/2012, 1051/2012, 1152/2013 y 266/2013, del índice del citado Segundo Tribunal Colegiado, la Junta responsable, de oficio, en una original actuación, se declaró incompetente para el conocimiento del asunto, en términos del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo. En cambio, en el juicio de amparo directo laboral 1050/2012, promovido por la parte actora en el juicio natural –trabajador–, del índice del propio Tribunal, se destacó que la Junta responsable declaró su incompetencia, con motivo del incidente de competencia planteado por la demandada, Ferrocarriles Nacionales de México.

En el juicio de amparo directo laboral 858/2011, del índice del citado Primer Tribunal Colegiado, se mencionó que la Junta responsable, en una original actuación, se declaró incompetente para conocer del conflicto.

c) En las ejecutorias dictadas en los referidos juicios de amparo directo laborales, que fueron resueltos por el citado Segundo Tribunal Colegiado, se establecieron las razones por las cuales la violación que consideró actualizada dejaba en estado de indefensión a la quejosa y trascendía al resultado del fallo [1], así como los motivos por los que resultaba ilegal el acuerdo mediante el cual la Junta responsable determinó que fue errónea su declaración de incompetencia y continuó con el trámite del asunto [2].

Es así, pues como antes se destacó, al respecto dicho órgano jurisdiccional razonó:

1. **Que la violación procesal detectada dejó en estado de indefensión a la parte quejosa y trascendió al resultado del fallo:** no sólo porque así lo prevenía expresamente la ley, sino porque en los casos en que una autoridad continúe conociendo de un juicio, a pesar de haber declarado su incompetencia, o que se encuentra impedida, es nulo todo lo actuado con poste-

rioridad, esto es, al emitirse actos por una autoridad o juzgador que no contaba con los requisitos o presupuestos legales necesarios para emitirlos.

2. **Que resultaba ilegal el acuerdo mediante el cual la Junta responsable determinó que fue errónea su declaración de incompetencia y continuó con el trámite del asunto:**

- Porque al haberse declarado incompetente la Junta responsable, implicó que estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo reclamado, lo que conlleva a la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento, con posterioridad al mencionado auto, incluyendo, por supuesto, el acuerdo por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado.

- Porque si dicha autoridad, en un determinado auto, se declaró incompetente para conocer de la controversia laboral de la que derivó el acto reclamado, en términos de los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo estaba impedida legalmente para revocar tal determinación.

Mientras que en el juicio de amparo directo laboral 858/2011, del índice del citado Primer Tribunal Colegiado, no se dilucidaron tales cuestiones, sino que dicho órgano colegiado se concretó a razonar que no era verdad que la responsable, después de declararse incompetente, hubiera continuado con el conocimiento del juicio y dictado el laudo impugnado, ya que para ello medió el auto, en el que sostuvo su competencia jurisdiccional, de ahí que estimó que no se actualizaba la violación procesal contemplada en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, relativa a que el tribunal del trabajo continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia.

E, incluso, dicho Tribunal Colegiado señaló que no pasaba por alto la alegación de la quejosa, en el sentido de que la responsable, con el dictado del segundo de los referidos acuerdos, revocó, con infracción a los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, el primero de ellos; sin embargo, afirmó, que al no encontrarse contemplado ese caso como violación procesal, en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ni estimarse análogo a los ahí previstos, la impetrante debió combatirlo, de así considerarlo pertinente, a través del juicio de amparo indirecto y no como violación procesal en el amparo directo.

Así, el citado Segundo Tribunal Colegiado, arribó a la conclusión de que se actualizaba la hipótesis a que se refiere la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, sustentándose en la ilegalidad del acuerdo mediante el cual la Junta responsable determinó que fue errónea su declaración de incompetencia y continuó con el trámite del asunto.

Es decir, fue la ilegalidad de esa posterior actuación de la autoridad, la que lo condujo a tener únicamente como válida la inicial declaratoria de incompetencia de la Junta responsable y como consecuencia, a considerar, bajo ese panorama –en el que ya no aparecía esa posterior actuación–, que indebidamente continuó el procedimiento, no obstante el planteamiento competencial efectuado.

En cambio, el citado Primer Tribunal Colegiado, fue precisamente en la validez de tal actuación posterior, en la que se sustentó para sostener que no era verdad que la Junta responsable, después de declararse incompetente, hubiera continuado con el conocimiento del juicio y dictado el laudo impugnado, ya que para ello medió el auto, en el que sostuvo su competencia jurisdiccional, de ahí que no se actualizaba la violación procesal contemplada en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas y no obstante que las cuestiones fácticas que rodearon el análisis efectuado por los Tribunales Colegiados contendientes no sean exactamente iguales o existan diferencias en los elementos accesorios o secundarios que precedan a las ejecutorias respectivas –según se advierte de las circunstancias antes relacionadas–, como se expuso, tales órganos jurisdiccionales adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre un problema jurídico central perfectamente identificable:

Si el supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, actualiza o no la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X –primera parte–, de la abrogada Ley de Amparo.

Lo que, consecuentemente, constituye la materia de la presente contradicción, que amerita ser resuelta, en aras de la certidumbre en las decisiones judiciales, pues según los invocados criterios del Pleno del Alto Tribunal, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución. Ante lo cual, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión.

Todo lo cual lleva a establecer que sí existe la contradicción de tesis que se denuncia.

SEXTO.—**Criterio que debe prevalecer.**

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta este Pleno de Circuito, que coincide, en lo esencial, con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito.

Lo anterior, pues ciertamente **el supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, no actualiza la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X –primera parte–, de la abrogada Ley de Amparo**.

Tal porción normativa prevé lo siguiente:

"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: …

"X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;"

Luego, la actualización de tal hipótesis presupone la existencia de dos condiciones:

1. **Que se hubiera promovido una competencia.**

2. **Que con posterioridad a ello, el tribunal del trabajo, en el caso, continúe el procedimiento.**

Aquí es pertinente hacer hincapié en la circunstancia de que para que se dé la primera de tales condiciones, como prevé la disposición invocada, únicamente se requiere de la existencia de la promoción de una cuestión competencial –independientemente de cuál sea su resultado–, esto es, de la sola formulación de un planteamiento de tal naturaleza, que por sí solo, conlleva la imposibilidad de continuar con el procedimiento de origen, hasta que

se resuelva en definitiva esa cuestión competencial, según se deduce del contenido del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo que más adelante se invoca.

Dicha primera condición, a saber, **que se hubiera promovido una competencia**, se encuentra presente en todos los casos que fueron materia de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

Es así, pues como se destacó en el apartado anterior, según lo asentado en las ejecutorias respectivas, en los expedientes naturales, de los que derivaron los juicios de amparo directo laborales 1116/2012, 1051/2012, 1152/2013 y 266/2013, del índice del citado Segundo Tribunal Colegiado, la Junta responsable, de oficio, en una original actuación, se declaró incompetente para el conocimiento del asunto, en términos del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que en el juicio de amparo directo laboral 1050/2012, promovido por la parte actora en el juicio natural –trabajador–, del índice del propio tribunal, se destacó que la Junta responsable declaró su incompetencia, con motivo del incidente de competencia planteado por la demandada, Ferrocarriles Nacionales de México.

Así también, en el juicio de amparo directo laboral 858/2011, del índice del citado Primer Tribunal Colegiado, se mencionó que la Junta responsable, en una original actuación, se declaró incompetente para conocer del conflicto.

Es decir, sólo en uno de los citados asuntos, existió promoción de tal cuestión competencial, por una de las partes –demandada–, hipótesis que actualiza perfectamente la primera de las enunciadas condiciones a saber, **que se hubiera promovido una competencia**.

En cambio, en el resto de los asuntos, la Junta responsable, de oficio, en una original actuación, se declaró incompetente para el conocimiento del asunto, hipótesis que, por analogía, puede considerarse que también actualiza la primera de tales condiciones, pues con independencia de que la citada autoridad haya sido quien introdujo esa cuestión competencial, es decir, que no tuvo su origen en promoción de parte alguna, lo cierto es que no puede desconocerse la existencia de tal planteamiento en el juicio natural, que al igual como sucede cuando existe esa promoción de parte, por sí solo conlleva a la imposibilidad de continuar con el procedimiento de origen, hasta que se resuelva en definitiva esa cuestión competencial, según se deduce del contenido del siguiente precepto, que ordena la remisión inmediata del expediente a la Junta que se estime competente.

En efecto, el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, dispone:

"Artículo 701. La Junta de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje, de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley."

Del citado precepto, se advierte la obligación de la Junta responsable de declararse incompetente para conocer de un determinado asunto, cuando estime que existan en el expediente datos que lo justifiquen, caso en el cual, con citación de las partes, debe remitir de inmediato el expediente a la Junta o tribunal que estime competente –lo que evidentemente le impide seguir actuando en el mismo–.

Determinación que no es definitiva, sino que se encuentra supeditada a la consecuente aceptación de competencia, por parte de la autoridad a la que se estimó competente para conocer del asunto, dado que el propio precepto contempla la posibilidad de que, a su vez, esta última autoridad, a quien se le remitieron los autos relativos, se declare incompetente, caso en el cual debe remitir de inmediato el expediente a la autoridad que habrá de decidir la competencia.

De ahí que en esa hipótesis también pueda considerarse, por analogía, que se actualiza la primera de las condiciones a que se refiere la primera parte de la aludida fracción X del artículo 159 de la abrogada Ley de Amparo, a saber, **que se hubiera promovido una competencia**, ya que, se reitera, no puede desconocerse la existencia de tal planteamiento en el juicio natural, por parte de la autoridad –que aunque no es definitivo–, al igual como sucede cuando existe promoción de parte, como se dijo, por sí solo, conlleva a la imposibilidad de continuar con el procedimiento de origen, hasta que se resuelva en definitiva esa cuestión competencial.

Sin embargo, en todos los casos que fueron materia de las ejecutorias emitidas por los tribunales contendientes, no se encuentra presente la segunda condición para que se actualice la hipótesis de violación procesal de que se habla, a saber, **que con posterioridad a la promoción de tal cuestión competencial, en el caso, el tribunal del trabajo, continúe el procedimiento**.

Así pues, la violación procesal a que se refiere la primera parte de la fracción X del citado artículo 159 de la abrogada Ley de Amparo, se actualiza,

precisamente, por la circunstancia de que una autoridad –en el caso, tribunal de trabajo–, ante quien se hubiera promovido una competencia, no obstante ello, con posterioridad, continúa el procedimiento, es decir, sigue actuando en el mismo. Esto último, desatendiendo la existencia de tal promoción o planteamiento de cuestión competencial.

Lo que no acontece en los casos de que se habla, dado que la Junta responsable no continuó actuando cuando se encontraba vigente para ella el planteamiento de incompetencia que inicialmente formuló, sino que lo hizo una vez que expuso las razones por las cuales ya no era su intención seguir manteniendo su postura de incompetencia, pues al efecto emitió un auto en el que determinó que fue errónea su inicial postura, para posteriormente y una vez que abdicó en tal planteamiento original, continuar con el trámite del procedimiento hasta su resolución.

Además de que esta segunda postura que adoptó la Junta responsable, en sí misma considerada, si bien se emitió dentro del procedimiento laboral de origen, que tiene por objeto esclarecer las pretensiones de las partes, sólo se involucró con la resolución de una cuestión competencial que debía dilucidarse, precisamente a efecto de establecer, a qué autoridad le correspondía conocer del asunto y continuar con el trámite del procedimiento respectivo.

Sin que, para verificar si se actualiza o no la primera hipótesis a que alude la fracción X del citado artículo 159 de la abrogada Ley de Amparo, sea dable sustentarse en la ilegalidad del acuerdo mediante el cual la Junta responsable determinó que fue errónea su declaración de incompetencia y continuó con el trámite del asunto, en los términos que lo hizo el citado Segundo Tribunal Colegiado.

En efecto, como se destacó en el apartado anterior, dicho órgano colegiado calificó de ilegal el referido acuerdo razonando:

1. Que al haberse declarado incompetente la Junta responsable, implicó que estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo reclamado, lo que conlleva a la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento, con posterioridad al mencionado auto, incluyendo, por supuesto, el acuerdo por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado (lo que, en todo caso, bastaría para arribar a la conclusión de que era ilegal la posterior actuación de la Junta, sin necesidad de invocar la siguiente razón).

2. Que si dicha autoridad, en un determinado auto, se declaró incompetente para conocer de la controversia laboral de la que derivó el acto recla-

mado, en términos de los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo estaba impedida legalmente para revocar tal determinación.

Es decir, fue la ilegalidad de esa posterior actuación de la autoridad, la que lo condujo a tener únicamente como válida la inicial declaratoria de incompetencia de la Junta responsable y como consecuencia, a considerar, bajo ese panorama –en el que ya no aparecía esa posterior actuación–, que indebidamente continuó el procedimiento, no obstante el planteamiento competencial efectuado.

Sin embargo, la primera de las razones que externó no es jurídicamente correcta para justificar su postura, a saber, **que al haberse declarado incompetente la Junta responsable, implicó que estuviera impedida legalmente para seguir conociendo del juicio y dictar el laudo reclamado, lo que conlleva a la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento, con posterioridad al mencionado auto, incluyendo, por supuesto, el acuerdo por el que se volvió a declarar competente, así como el laudo reclamado**.

Lo anterior, pues como se dijo, la Junta responsable no continuó actuando estando aún vigente para ella el planteamiento de incompetencia que inicialmente formuló, sino que lo hizo una vez que expuso las razones por las cuales ya no era su intención seguir manteniendo su postura de incompetencia, pues al efecto emitió un auto en el que determinó que fue errónea su inicial postura, para posteriormente y una vez que abdicó en tal planteamiento original, continuar con el trámite del procedimiento hasta su resolución.

Luego, no desatendió la existencia de tal promoción o planteamiento de cuestión competencial y continuó actuando, sino que lo hizo al amparo de la posterior actuación que emitió, mediante la cual pretendió justificar el seguimiento del trámite del asunto, la cual, hasta ese momento procesal, se encontraba vigente para ella.

Tampoco la segunda de las razones que externó el citado Tribunal Colegiado es jurídicamente correcta para justificar su postura, a saber, **que si dicha autoridad, en un determinado auto, se declaró incompetente para conocer de la controversia laboral de la que derivó el acto reclamado, en términos de los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo estaba impedida legalmente para revocar tal determinación**.

Lo anterior, pues para estar dicho órgano colegiado en aptitud de examinar tal aspecto, esto es, para poder dilucidar si la Junta responsable había incurrido o no en una conducta que implicaba una revocación de sus deter-

minaciones –aspecto que, en el caso, involucra una cuestión competencial, precisamente porque al declararse fundado, subsistiría la determinación que se dijo revocada (declaración original de incompetencia de la Junta, de oficio)–, necesariamente debió formar parte de la litis natural, a través del respectivo cuestionamiento competencial de la parte inconforme; requisito que, según los datos proporcionados en las ejecutorias respectivas, no se advierte satisfecho en los juicios de amparo materia de la presente contradicción que fueron resueltos por el citado Segundo Tribunal Colegiado, bajo los números 1116/2012, 266/2013, 1051/2012 y 1152/2013.

En efecto, según lo destacado en el apartado anterior, sólo en el juicio de amparo directo laboral 1050/2012, promovido por la parte actora en el juicio natural –trabajador–, del índice del propio Tribunal, la Junta responsable declaró su incompetencia, con motivo del incidente de competencia planteado por la demandada, Ferrocarriles Nacionales de México. En el resto de los asuntos de que se habla, se mencionó que la Junta responsable, fue quien en una original actuación, de oficio, se declaró incompetente para conocer del conflicto.

Luego, por lo que hace a los asuntos materia de la presente contradicción, en donde la Junta responsable, fue quien en una original actuación, de oficio, se declaró incompetente para conocer del conflicto, el acuerdo mediante el cual la citada responsable determinó que fue errónea su declaración de incompetencia y continuó con el trámite del asunto, pudo cuestionarse, tratándose del actor, a través de cualquier vía de manifestación que evidenciará precisamente, su intención de que la Junta ante cuya jurisdicción originalmente se sometió, ya no fuera quien conociera del asunto, lo que no se advierte hubiera acontecido en la especie.

Antes bien, se permitió que el litigio continuara hasta que la autoridad agotó su jurisdicción, mediante el dictado del laudo reclamado, sin motivo aparente alguno, que justificara esperar el desarrollo de todo el juicio para inconformarse con la competencia de la autoridad natural, hasta el amparo directo promovido contra dicho fallo, lo que, en algunas de las ejecutorias de que se habla se invocó, a título de suplencia de queja deficiente, cuando no procedía hacerlo, por no formar parte de la litis natural.

De ahí que, se reitera, para estar dicho órgano colegiado en aptitud de examinar tal aspecto que involucra una cuestión competencial, esto es, de si la Junta responsable había incurrido o no en una conducta que implicaba una revocación de sus determinaciones, necesariamente debió formar parte de la litis natural, a través del respectivo cuestionamiento competencial de la parte inconforme; requisito que, según los datos proporcionados en las ejecutorias respectivas, no se advierte satisfecho en los juicios de amparo materia

de la presente contradicción que fueron resueltos por el citado Segundo Tribunal Colegiado, bajo los números 1116/2012, 266/2013, 1051/2012 y 1152/2013 y que por lo mismo, tampoco podía ser invocado, a título de suplencia de queja.

Lo razonado encuentra apoyo en los siguientes criterios:

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Tesis: Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XVIII, julio de 2003
"Materia común
"Tesis: P./J. 20/2003
"Página: 10

"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR, EN EL JUICIO O EN LA REVISIÓN, EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE.—Cuando en el juicio ordinario no se hizo valer la incompetencia de la autoridad responsable, es improcedente que en el amparo directo en revisión se introduzca como novedoso tal planteamiento, ni aun en el supuesto de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la queja deficiente, pues ese examen requiere, necesariamente, de su previo cuestionamiento, vía excepción, en el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la resolución que considera infundada dicha excepción es de aquellos actos en el juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, en virtud de que se emite en atención a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la determinación de la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo; de manera que si aquella resolución no se combate a través del amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente, la que si bien tiene las mismas funciones, no aplica la misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento."

"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Tesis: Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XVI, agosto de 2002
"Materia común
"Tesis: 2a./J. 84/2002
"Página: 203

"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.—Si no se planteó en el juicio ordinario, es improcedente que en el amparo directo se introduzca como novedoso el estudio de la incompetencia de la autoridad responsable, ni aun en el caso de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la queja deficiente por considerar que el ordenamiento que rige la competencia ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ese examen requiere, necesariamente, de su previo cuestionamiento, en vía de excepción, en el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la resolución mediante la cual se considere infundada dicha excepción, es de aquellas que se consideran de imposible reparación para efectos del juicio de garantías, en virtud de que se emite en atención a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la determinación de la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo, de manera que si aquella resolución no se combate mediante el citado juicio de amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente, la que, si bien tiene las mismas funciones, no aplica la misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento."

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia obligatoria en el circuito, el siguiente criterio que sustenta este Tribunal Pleno:

ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X –PRIMERA PARTE–, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN. La violación procesal que contempla la fracción X –primera parte–, del artículo 159 de la abrogada Ley de Amparo, presupone la existencia de dos condiciones: 1. Que se hubiera promovido una competencia y 2. Que con posterioridad a ello, el tribunal del trabajo, en el caso, continúe el procedimiento, desatendiendo la existencia de esa promoción o planteamiento de cuestión competencial. Lo que no acontece cuando una junta de conciliación y arbitraje que, de oficio, originalmente se declaró incompetente para el conocimiento de un asunto, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declara-

ción y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, pues si bien en tal supuesto, por analogía, se presenta la primera de tales condiciones, ya que la propia junta introdujo esa cuestión competencial, no se actualiza la segunda, dado que no continuó actuando bajo la vigencia del planteamiento de incompetencia que formuló, sino virtud del auto, en el que abdicó de su planteamiento original. Sin que pueda sostenerse que se actualiza la citada violación procesal, bajo el argumento de que la posterior actuación constituyó una revocación de su propia determinación, cuando ello no formó parte de la litis natural, mediante el respectivo cuestionamiento competencial formulado por la parte inconforme.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, en términos del considerando sexto de esta resolución.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno del Quinto Circuito, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.

TERCERO.—Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos de los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los Tribunales contendientes, así como a los demás Tribunales Colegiados del Quinto Circuito para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, remítase copia certificada de esta ejecutoria a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis; y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, Hugo Gómez Ávila, Federico Rodríguez Celis, José Manuel Blanco Quihuis y Francisco Domínguez Castelo, siendo ponente el último de los nombrados; quienes firman con la secretaria de Acuerdos Licenciada Laura Catalina Maldonado Arce, quien autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada, confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X –PRIMERA PARTE–, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN. La violación procesal que contempla la fracción X –primera parte–, del artículo 159 de la abrogada Ley de Amparo, presupone la existencia de dos condiciones: 1. Que se hubiera promovido una competencia y 2. Que con posterioridad a ello, el tribunal del trabajo, en el caso, continúe el procedimiento, desatendiendo la existencia de esa promoción o planteamiento de cuestión competencial. Lo que no acontece cuando una junta de conciliación y arbitraje que, de oficio, originalmente se declaró incompetente para el conocimiento de un asunto, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, pues si bien en tal supuesto, por analogía, se presenta la primera de tales condiciones, ya que la propia junta introdujo esa cuestión competencial, no se actualiza la segunda, dado que no continuó actuando bajo la vigencia del planteamiento de incompetencia que formuló, sino virtud del auto, en el que abdicó de su planteamiento original. Sin que pueda sostenerse que se actualiza la citada violación procesal, bajo el argumento de que la posterior actuación constituyó una revocación de su propia determinación, cuando ello no formó parte de la litis natural, mediante el respectivo cuestionamiento competencial formulado por la parte inconforme.

PLENO DEL QUINTO CIRCUITO
PC.V. J/3 A (10a.)

Contradicción de tesis 1/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 26 de noviembre de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, Hugo Gómez Ávila, Federico Rodríguez Celis, José Manuel Blanco Quihuis y Francisco Domínguez Castelo. Ponente: Francisco Domínguez Castelo. Secretaria: Claudia Guadalupe Téllez Fimbres.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 858/2011, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos 1116/2012, 1050/2012, 266/2013, 1051/2012 y 1152/2013.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN.

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 17 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO, ANTONIO CEJA OCHOA Y MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. PONENTE: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO. SECRETARIA: CLAUDIA ELENA HURTADO DE MENDOZA GODÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de este Cuarto Circuito, en un tema que, por su naturaleza administrativa, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

El artículo 227, fracción III,[2] de la ley de la materia, establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226,[3] podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o **las partes** en los asuntos que las motivaron.

En el caso, la denuncia de contradicción la formula **********, abogado autorizado de los quejosos, quien tiene reconocido dicho carácter en los expedientes de amparo en revisión números 658/2011 y 168/2014, según se advierte de la lectura de los resultandos de tales sentencias,[4] por lo que es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

Sobre el particular, se estima aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice textualmente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."[5]

---

[2] "Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: …
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
[3] "Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por: …
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente."
[4] Fojas 8 vuelta y 24 del expediente de contradicción.
[5] Novena Época. Registro digital: 168488. Instancia: Segunda Sala. Tesis: Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, materia común, tesis 2a./J. 152/2008, página 227.

TERCERO.—El **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito**, al resolver el **amparo en revisión 658/2011**, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil doce, consideró lo siguiente:

"SEXTO.—Estudio de los agravios. Los agravios que hacen valer los quejosos, son infundados en parte y en otra, fundados.

"En principio se atiende a la última parte de los argumentos expuestos por los inconformes, en el sentido de que en el particular se actualizó una violación procesal, al omitirse por el Juez de Distrito notificarles personalmente el acuerdo, a través del cual, se agregaron a los autos del juicio de amparo las constancias que integran el expediente administrativo 115/2011, que remitieron las autoridades responsables, para justificar su acto.

"En efecto, como lo afirman los inconformes, en el particular, el juzgador desatendió la esencia de su reclamo, pues un aspecto insoslayable, lo constituye, que los impetrantes de garantías acudieron a reclamar del secretario y del coordinador jurídico, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, la separación, remoción, baja o cese del servicio como policías, de manera injustificada, al argumentar que se les notificó verbalmente tal determinación.

"En consecuencia, si las autoridades en sus informes justificados manifestaron que no era cierto el acto reclamado; empero, que el quince de abril de dos mil once, se inició el procedimiento administrativo número 115/2011, en razón de que los impetrantes de garantías abandonaron el servicio sin dar explicación, lo que ocasionó la pérdida de confianza, es evidente, que al contarse con dicho expediente administrativo 115/2011, una vez remitido éste al juzgado por las autoridades responsables, a requerimiento expreso del a quo, lo conducente era hacer del conocimiento de los quejosos su contenido.

"Sin embargo, el juzgador emitió acuerdo de once de agosto de dos mil once, a través del cual, se limitó a agregar a los autos del juicio de garantías, las copias certificadas del procedimiento administrativo 115/2011, que le remitió la autoridad, sin ordenar la notificación del auto a los quejosos, con la intención de que fuera de su conocimiento y así estuvieran en condiciones de ampliar su demanda de garantías, si era su deseo realizarlo.

"No obstante, que en el particular prevalecía la manifestación de los quejosos, en el sentido de que habían sido separados de su cargo como Policías del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en razón de una notificación verbal por parte de la autoridad administrativa, lo que adujeron violentó las formalidades del procedimiento, por no existir mandamiento escrito de autoridad facultada para privarlos de sus derechos.

"Sin embargo, ningún sentido práctico tendría devolver los autos al Juez de Distrito para que notificara personalmente a los quejosos el auto, a través del cual, agregó al juicio de garantías el expediente administrativo 115/2011, toda vez que en sus agravios acuden a inconformarse con el contenido de dicho expediente, lo que hace posible que este Tribunal Colegiado, en plenitud de jurisdicción los atienda, a fin de salvaguardar la garantía de pronta expedición de justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Lo anterior, en atención a que esencialmente los inconformes aducen, que el Juez de Distrito omitió atender la totalidad de sus conceptos de violación y que el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, carecía de competencia para emitir la resolución en la que determinó el cese y baja de, ********** y **********.

"En consecuencia, procede atender de manera conjunta los conceptos de violación expresados por los quejosos, en estrecha vinculación con los agravios y el contenido del expediente administrativo 115/2011.

"Los quejosos en su demanda de garantías, señalaron bajo protesta de decir verdad:

"1. Que **********, ingresó a laborar el ********** de ********** de ********** y que **********, ingresó el ********** de ********** de **********, para desempeñar la actividad de policías, con un salario quincenal de $********** (********** moneda nacional), más un bono anticorrupción de $********** (********** moneda nacional), que se les cubría los días quince de cada mes, además de $********** (********** moneda nacional), que se les cubría a finales de cada mes como prima de riesgo.

"Indicaron que en atención a la naturaleza administrativa de su relación con la secretaría, a la fecha de presentación de la demanda de garantías, no se les pagó ninguna liquidación por indemnización por el tiempo trabajado, con motivo de la baja en el empleo.

"2. Que el quince de abril de dos mil once, se les informó que el secretario de seguridad pública, había ordenado su separación del cargo.

"Los quejosos en sus conceptos de violación argumentaron:

"a) La restricción en sus garantías individuales, porque antes de ser privados de su trabajo, se les debió otorgar la garantía de audiencia, por una autoridad competente, en el que se siguieran las formalidades del procedimiento.

"b) Haber sido discriminados, lo que dijeron atentó contra su dignidad humana, al presentarlos como malos servidores públicos, al registrarse en su expediente administrativo que se lleva en la Secretaría de Coordinación Administrativa, así como en la Dirección de Recursos Humanos en el Municipio en que prestaban sus servicios.

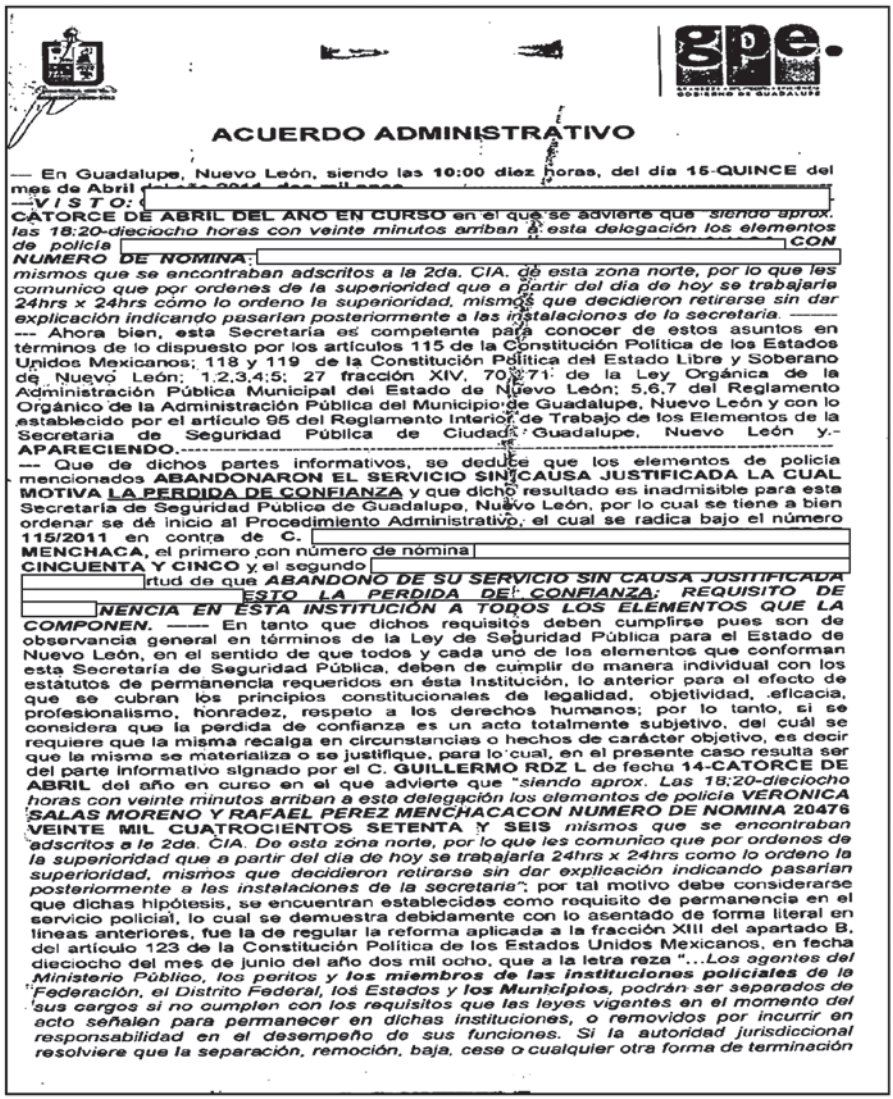
"c) Se les impidió continuar dedicándose a su trabajo lícito, sin determinación judicial administrativa de autoridad competente, lo que aducen se les debe resarcir en cuanto al pago de su salario, con lo cual mencionan, se violaron las formalidades del procedimiento, al no existir el mandamiento escrito de autoridad competente, porque en cuanto a las autoridades ordenadoras en cuanto a nivel jerárquico, se refiere sólo está facultada para impartir órdenes de trabajo, empero, no para privarlos de sus derechos.

"Ahora bien, en atención a lo anterior, corresponde atender que obra agregado en copia certificada al juicio de garantías el expediente administrativo 115/2011, a fojas de la setenta y dos a la noventa y seis, al que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria según lo prevé el diverso ordinal 2o. de la Ley de Amparo.

"Del expediente administrativo 115/2011 se desprende, que el quince de abril de dos mil once, el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, que indicó en el propio acuerdo ser competente para emitir tal determinación, con fundamento en lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 y 119 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 1, 2, 3, 4, 5, 27, fracción XIV, 70 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 5, 6 y 7 del Reglamento Orgánica de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León (sic); y, 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, ordenó el inicio del procedimiento administrativo seguido a ********** y **********, en atención al abandono de su servicio sin causa justificada, con lo que indicó, se motivó la pérdida de confianza, requisito de permanencia en la institución a todos los elementos que la componen.

"Acuerdo que ordenó notificar a los ahora quejosos, además de agregarse en el acuerdo que se ponían a disposición de aquéllos todos y cada uno de los documentos que integraban el expediente, otorgándoles el término de cinco días hábiles, contados a partir de que surtiera efectos la notificación del acuerdo, para que se presentaran en la oficina del secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, a contestar e informar con respecto a los hechos que motivaron el procedimiento, hicieran valer sus alegatos y rindieran las pruebas correspondientes para desvirtuarlos (fojas de la 72 a la 73 del juicio de garantías).

"Para mejor comprensión a continuación se digitaliza el acta administrativa antes descrita:



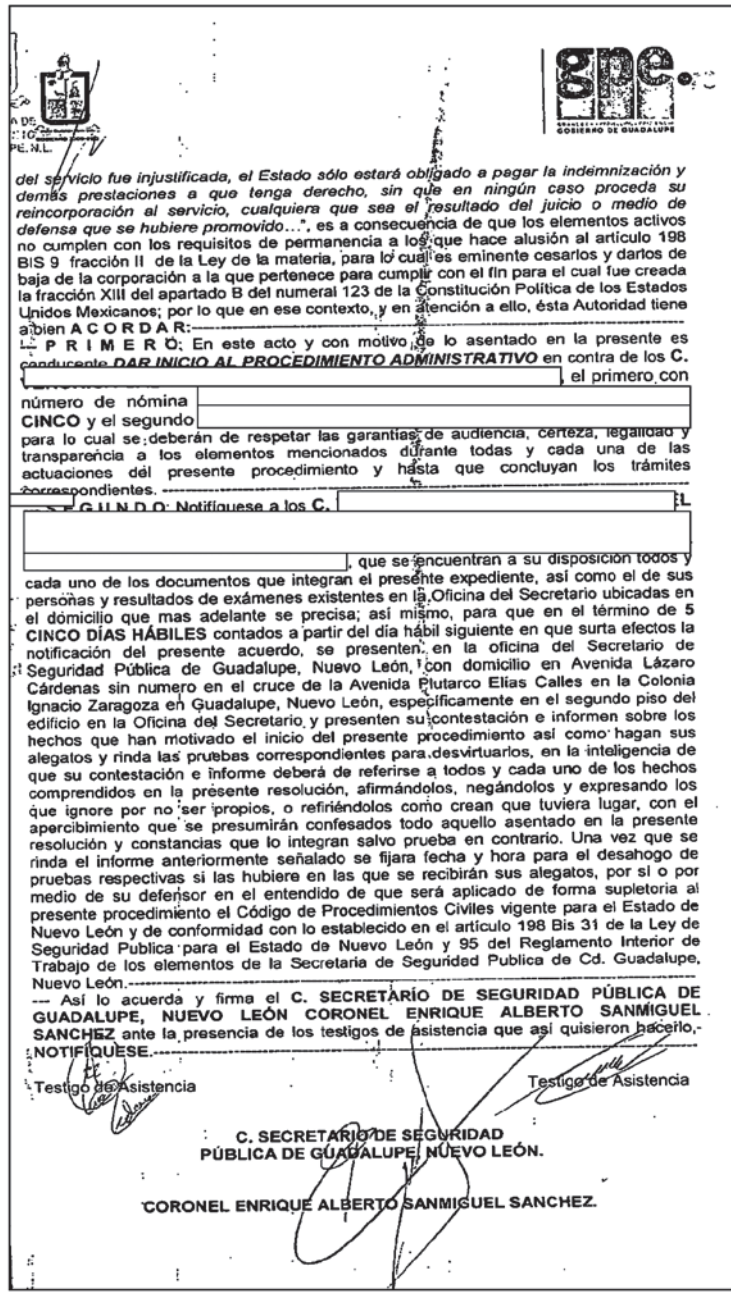
ACUERDO ADMINISTRATIVO

— En Guadalupe, Nuevo León, siendo las **10:00** diez horas, del día **15-QUINCE** del mes de Abril del año 2011 dos mil once

—**V I S T O:** [redacted] **CATORCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO** en el que se advierte que *"siendo aprox. las 18:20-dieciocho horas con veinte minutos arriban a esta delegación los elementos de policía* [redacted] **CON NUMERO DE NOMINA** [redacted] *mismos que se encontraban adscritos a la 2da. CIA. de esta zona norte, por lo que les comunico que por ordenes de la superioridad que a partir del dia de hoy se trabajaría 24hrs x 24hrs como lo ordeno la superioridad, mismos que decidieron retirarse sin dar explicación indicando pasarían posteriormente a las instalaciones de la secretaria.* ——

--- Ahora bien, esta Secretaría es competente para conocer de estos asuntos en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1,2,3,4,5; 27 fracción XIV, 70, 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 5,6,7 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León y con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León y.- **APARECIENDO.**----------

--- Que de dichos partes informativos, se deduce que los elementos de policía mencionados **ABANDONARON EL SERVICIO SIN CAUSA JUSTIFICADA LA CUAL MOTIVA LA PERDIDA DE CONFIANZA** y que dicho resultado es inadmisible para esta Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, por lo cual se tiene a bien ordenar se dé inicio al Procedimiento Administrativo, el cual se radica bajo el número **115/2011** en contra de **C.** [redacted] **MENCHACA,** el primero con número de nómina [redacted] **CINCUENTA Y CINCO** y el segundo [redacted] rtud de que ***ABANDONO DE SU SERVICIO SIN CAUSA JUSTIFICADA*** [redacted] ***ESTO LA PERDIDA DE CONFIANZA; REQUISITO DE*** [redacted] ***NENCIA EN ESTA INSTITUCIÓN A TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN.*** —— En tanto que dichos requisitos deben cumplirse pues son de observancia general en términos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, en el sentido de que todos y cada uno de los elementos que conforman esta Secretaría de Seguridad Pública, deben de cumplir de manera individual con los estatutos de permanencia requeridos en ésta Institución, lo anterior para el efecto de que se cubran los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos; por lo tanto, si se considera que la perdida de confianza es un acto totalmente subjetivo, del cuál se requiere que la misma recaiga en circunstancias o hechos de carácter objetivo, es decir que la misma se materializa o se justifique, para lo cual, en el presente caso resulta ser del parte informativo signado por el C. **GUILLERMO RDZ L** de fecha **14-CATORCE DE ABRIL** del año en curso en el que advierte que *"siendo aprox. Las 18:20-dieciocho horas con veinte minutos arriban a esta delegación los elementos de policía* ***VERONICA SALAS MORENO Y RAFAEL PEREZ MENCHACACON NUMERO DE NOMINA*** **20476 VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS** *mismos que se encontraban adscritos a la 2da. CIA. De esta zona norte, por lo que les comunico que por ordenes de la superioridad que a partir del dia de hoy se trabajaría 24hrs x 24hrs como lo ordeno la superioridad, mismos que decidieron retirarse sin dar explicación indicando pasarían posteriormente a las instalaciones de la secretaria"*; por tal motivo debe considerarse que dichas hipótesis, se encuentran establecidas como requisito de permanencia en el servicio policial, lo cual se demuestra debidamente con lo asentado de forma literal en líneas anteriores, fue la de regular la reforma aplicada a la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en fecha dieciocho del mes de junio del año dos mil ocho, que a la letra reza *"...Los agentes del Ministerio Público, los peritos y* ***los miembros de las instituciones policiales*** *de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y* ***los Municipios,*** *podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación*



del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido…", es a consecuencia de que los elementos activos no cumplen con los requisitos de permanencia a los que hace alusión al artículo 198 BIS 9 fracción II de la Ley de la materia, para lo cual es eminente cesarlos y darlos de baja de la corporación a la que pertenece para cumplir con el fin para el cual fue creada la fracción XIII del apartado B del numeral 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en ese contexto, y en atención a ello, ésta Autoridad tiene a bien **A C O R D A R:**----------

L.- **P R I M E R O**: En este acto y con motivo de lo asentado en la presente es conducente ***DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO*** en contra de los **C.** [redacted], el primero con número de nómina [redacted] **CINCO** y el segundo [redacted] para lo cual se deberán de respetar las garantías de audiencia, certeza, legalidad y transparencia a los elementos mencionados durante todas y cada una de las actuaciones del presente procedimiento y hasta que concluyan los trámites correspondientes. ----------

[redacted] **G U N D O**: Notifíquese a los **C.** [redacted], que se encuentran a su disposición todos y cada uno de los documentos que integran el presente expediente, así como el de sus personas y resultados de exámenes existentes en la Oficina del Secretario ubicadas en el domicilio que mas adelante se precisa; así mismo, para que en el término de 5 **CINCO DÍAS HÁBILES** contados a partir del día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se presenten en la oficina del Secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, con domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas sin numero en el cruce de la Avenida Plutarco Elías Calles en la Colonia Ignacio Zaragoza en Guadalupe, Nuevo León, específicamente en el segundo piso del edificio en la Oficina del Secretario y presenten su contestación e informen sobre los hechos que han motivado el inicio del presente procedimiento así como hagan sus alegatos y rinda las pruebas correspondientes para desvirtuarlos, en la inteligencia de que su contestación e informe deberá de referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la presente resolución, afirmándolos, negándolos y expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crean que tuviera lugar, con el apercibimiento que se presumirán confesados todo aquello asentado en la presente resolución y constancias que lo integran salvo prueba en contrario. Una vez que se rinda el informe anteriormente señalado se fijara fecha y hora para el desahogo de pruebas respectivas si las hubiere en las que se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor en el entendido de que será aplicado de forma supletoria al presente procedimiento el Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Nuevo León y de conformidad con lo establecido en el artículo 198 Bis 31 de la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Nuevo León y 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Publica de Cd. Guadalupe, Nuevo León.----------

--- Así lo acuerda y firma el **C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN CORONEL ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ** ante la presencia de los testigos de asistencia que así quisieron hacerlo.- **NOTIFÍQUESE.**----------

Testigo de Asistencia

Testigo de Asistencia

C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.

CORONEL ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ.

"El secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, mediante acuerdo de once de abril de dos mil once, comisionó al licenciado Eliud Cantú Segovia, con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 118 y 119 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 1, 2, 3, 4, 5, 27, fracción XIV, 70, 71, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 5, 6, 7 y 18, último párrafo del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, para ejercer las funciones de comisionado notificador y practicar todas las notificaciones ordenadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, en cumplimiento a los acuerdos y resoluciones emitidas por la oficina a su cargo (foja 74 del juicio de amparo).



SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COORDINACIÓN JURÍDICA

gpe.

OFICIO DE COMISION

LIC. ELIUD CANTÚ SEGOVIA
PRESENTE.-

------ Por medio de la presente y en uso de las atribuciones y vigilancia que me conceden los artículo 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en correlación con el 118 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 27 fracción XIV, 70, 71, 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León; 5, 6, 7 y 18 ultimo párrafo del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León. Esta Secretaria a mi cargo tiene a bien: ----------

----------COMISIONARLO----------

---- Para ejercer las funciones de COMISIONADO NOTIFICADOR y practicar todas las notificaciones ordenadas por la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN, en cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que sean emitidos por esta Oficina a mi cargo.----------

---- Así mismo se le autoriza para que en el ejercicio de su comisión haga uso de la Fuerza Pública con motivo de que se le obstaculice el cumplimiento de su deber. ----------

ATENTAMENTE
EN GUADALUPE NUEVO LEÓN A 11 DE ABRIL DEL 2011

CORONEL ENRIQUE ALBERTO SANMIGUEL SANCHEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE GUADALUPE NUEVO LEÓN

"Aparecen agregados a los autos los instructivos de notificación a ********** y **********, realizadas por el licenciado Eliud Cantú Segovia, notificador comisionado, quien en ambas diligencias precisó haberlas entendido con las respectivas personas a quien acudió a notificar, el primero de ellos identificándose con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral y la

segunda negándose a identificarse; constancia de notificación en la que se hizo constar que quienes las recibieron se negaron a firmar, lo que suscribió el notificador, con los testigos de asistencia (fojas de la 75 a la 78 del juicio de amparo).

"En acuerdo de veintiséis de abril de dos mil once, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, atendió al estado que guardaba el procedimiento administrativo 115/2011, y precisó que al haber transcurrido el plazo otorgado a ********** y **********, para que rindieran su contestación e informe, era el caso de hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de quince de abril anterior, de ahí que correspondía tenerlos por no contestando e informando sobre los hechos que se les imputaron con motivo del procedimiento administrativo sancionador que se les sigue, y no ofreciendo medio de prueba tendiente a desvirtuar los hechos que se les imputaron, de ahí que se les declaró confesos en relación a lo asentado en los documentos integrantes del expediente administrativo y señaló las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día dos de mayo de dos mil once, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos (foja 79 del juicio de amparo).

"Mediante instructivos dirigidos a ********** y **********, se indicó acudir a notificarles el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil once, en el que se precisó, que al haber transcurrido el plazo otorgado a ********** y **********, para que rindieran su contestación e informe, era el caso de hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de quince de abril anterior, de ahí que correspondía tenerlos por no contestando e informando sobre los hechos que se les imputaron con motivo del procedimiento administrativo sancionador que se les sigue, y no ofreciendo medio de prueba tendiente a desvirtuar los hechos que se les imputaron, de ahí que se les declaró confesos en relación a lo asentado en los documentos integrantes del expediente administrativo y señaló las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día dos de mayo de dos mil once, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, instructivos en los que se hizo constar que ********** y **********, se negaron a identificarse (fojas de la 80 a la 81 del juicio de amparo).

"A las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del cuatro de mayo de dos mil once, fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del expediente administrativo 115/2011, se hizo constar la incomparecencia de los elementos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 Bis 31, fracción IV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, se dio inicio a la etapa de pruebas y alegatos, a la que

se destacó no compareció representación alguna y en ese sentido se acordó tener por celebrada y concluida la audiencia (foja 82 del juicio de amparo).

"Del contenido del acuerdo elaborado el cuatro de mayo de dos mil once, fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, se notificó por el notificador comisionado a ********** y **********, apareciendo en el instructivo dirigido al primero de los citados, que él la recibió y que se identificó con credencial para votar; y, con respecto al instructivo dirigido a **********, se precisó que se entendió con ella la diligencia; empero, que se negó a identificarse (fojas 83 y 84 del juicio de amparo).

"De las diligencias de notificación, se aprecia que en el cuerpo del instructivo se precisó como acuerdo a notificar el de fecha cuatro de mayo de dos mil once, sin embargo, en la certificación de ambas notificaciones se precisó como acuerdo a notificar el de fecha diecisiete de mayo de dos mil once.

"El nueve de mayo de dos mil once, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, emitió acuerdo administrativo en el que resolvió el procedimiento administrativo 115/2011, instruido en contra de ********** y **********, en el que precisó los ordinales que dijo le otorgaban competencia para resolver el procedimiento administrativo, consistentes en los indicados en el acuerdo que dio inicio al procedimiento administrativo y concluyó con respecto a ********** y **********, declararlos confesando todo aquello asentado en la propuesta de remoción, al no haber rendido el informe sobre los hechos que se les imputaron, que por tal motivo y en consideración a que no afirmaron, ni negaron hecho alguno, de ello resultaba la falta de uno de los requisitos de permanencia en las instituciones policiales, de los elementos de policía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 Bis 9, fracción XII, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, de ahí que procedió a cesar y dar de baja de la corporación a los citados elementos y girar oficio al director de Recursos Humanos del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, para el efecto de que recibieran la indemnización constitucional en términos de lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así quedaran garantizados sus derechos laborales (fojas de la 85 a la 88 del juicio de amparo).

"El notificador comisionado elaboró instructivos en los que indicó acudir a notificar el acuerdo de seis de mayo de dos mil once, dentro del procedimiento administrativo 115/2011; empero, en la certificación de la notificación que se señala se practicó a **********, se indicó se procedió a notificar el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil once, mientras que en la certificación que se asentó al final del instructivo dirigido a **********, se estableció se notificaba un acuerdo de quince de abril de dos mil once.

"Ahora bien, detallados los antecedentes del procedimiento administrativo 115/2011, seguido por el secretario de Seguridad Pública en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, corresponde indicar, que ciertamente como éste lo destacó en el acuerdo de quince de abril de dos mil once, en que dio apertura a dicho expediente, tiene competencia para conocer y tramitar procedimientos relacionados con elementos de esa corporación.

"Lo anterior, se advierte específicamente del artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, el cual establece, que para la aplicación de sanciones el secretario de Seguridad Pública de dicho Municipio, una vez que tenga conocimiento de alguna infracción al citado reglamento, procederá a notificar al oficial que estime responsable, la falta que se le imputa y le citará a una diligencia en fecha y hora determinadas, en la que se producirán con todos los datos y circunstancias relativos a la infracción de que se trate, y se le dará oportunidad al propio interesado para que en su derecho de audiencia produzca su defensa y alegue a su favor lo que estime conveniente, diligencia que una vez concluida, se dictará la resolución que corresponda.

"Sin que pueda estimarse como lo aducen los quejosos, que tal ordinal es insuficiente para dotar al secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, de competencia para iniciar, tramitar y concluir los procedimientos correspondientes, por el hecho, de que el diverso artículo 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, prevea en su segundo párrafo, que cualquier controversia interna que se relacione con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios deberá ser atendida y resuelta por las unidades administrativas de asuntos internos, ello sea suficiente para considerar que la aludida autoridad carecía de competencia para iniciar, tramitar y resolver un procedimiento administrativo seguido a un elemento de la Policía de ese Municipio.

"Lo anterior se afirma, porque en el particular no se trata de una controversia interna que se relacione con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios, sino, de un procedimiento seguido por el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, a dos elementos de esa corporación, al considerar que cometieron una falta que debía sancionarse con su baja o cese.

"Más aún, que el primer párrafo del artículo 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, expresamente indica, que las sanciones aplicadas a los servidores públicos, serían en una sola audiencia por el inmediato superior jerárquico.

"Luego, al ser el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, el superior jerárquico de los quejosos, es evidente que se trataba de la autoridad competente, para iniciar, tramitar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente.

"Sin embargo, un hecho insoslayable lo constituye, que el propio artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, establece que para la aplicación de las sanciones, debía otorgarse a los elementos de dicha corporación su derecho de audiencia para que produjeran su defensa y alegaran a su favor lo que estimaran conveniente.

"En ese sentido y al constituir la garantía de audiencia un derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implica otorgar al particular de manera previa a la privación de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, la seguridad jurídica de que ello será a través de un procedimiento seguido ante autoridad competente, en el que se sigan las formalidades esenciales, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo indispensable es que en el procedimiento seguido a los quejosos se hubieren satisfecho tales requisitos.

"Empero, el examen de las constancias que integran el procedimiento administrativo 115/2011, que les siguió la autoridad, deja en claro que no fueron seguidas las debidas formalidades, necesarias para arribar al pleno convencimiento de que conocieron de la tramitación del expediente seguido en su contra, y que contaron con la oportunidad de acudir a presentar sus correspondientes pruebas y alegatos a fin de ser escuchados en el trámite correspondiente, de manera previa a la resolución del asunto.

"En tales circunstancias, de no quedar fehacientemente acreditado que se otorgaron a los quejosos las oportunidades de defensa necesarias para hacer valer ante la autoridad que dio trámite al procedimiento que concluyó con su cese o baja como policías del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, las defensas legales conducentes, implica que se les privó de su trabajo sin seguirse las formalidades correspondientes en el procedimiento administrativo 115/2011.

"Por tanto, si del examen de las pruebas que aparecen integradas al juicio de amparo, lo que se desprende es que existen evidentes inconsistentes (sic) en los instructivos, a través de los cuales, se indica se hizo del conocimiento de los ahora quejosos el contenido del procedimiento administrativo

115/2011, ello es suficiente para considerar violadas las reglas fundamentales del procedimiento que debió seguirse previo a su cese o baja como policías.

"En el caso se advierte, que en acuerdo de veintiséis de abril de dos mil once, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, atendió al estado que guardaba el procedimiento administrativo 115/2011, y precisó que al haber transcurrido el plazo otorgado a ********** y **********, para que rindieran su contestación e informe, era el caso de hacer efectivo el apercibimiento de tenerlos por no contestando e informando sobre los hechos que se les imputaron, ni ofreciendo medio de prueba tendiente a desvirtuar los hechos que se les imputaron, de ahí que se les declaró confesos y fue señalada fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos.

"Sin embargo, en los instructivos que aparecen agregados al juicio de amparo, no se advierte la notificación del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil once, sino, del acuerdo de veintisiete de abril de dos mil once, el que si bien es coincidente en el contenido del emitido el veintiséis, para estimar que fueron colmadas las formalidades del procedimiento de citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos se requería la plena certeza de que se trataba del acuerdo de citación a la misma, lo que no ocurre en el particular, ante la falta de coincidencia en las fechas.

"Además con el instructivo que se acompañó al juicio, para justificar que se notificó a los quejosos el levantamiento de la audiencia, tampoco se acredita tal extremo, porque no obstante haberse indicado que el acuerdo a notificar se trataba del atinente al cuatro de mayo de dos mil once, en la certificación elaborada por el notificador, asentó de manera coincidente en ambos instructivos, tanto en el dirigido a ********** como **********, que el cinco de mayo de dos mil once, les notificó un acuerdo de diecisiete de mayo de ese año. Así, ante tal falta de coincidencia en cuanto a las fechas de los acuerdos notificados, que según se indicó se trataba de la notificación del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil once, implica una irregularidad en la elaboración de la notificación, suficiente para estimar que en el procedimiento administrativo no se siguieron las debidas formalidades del procedimiento.

"Lo que ocurrió de igual forma, con la notificación del acuerdo de nueve de mayo de dos mil once, en el cual el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, determinó cesar y dar de baja de la corporación a los elementos y girar oficio al director de Recursos Humanos del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, para el efecto de que recibieran la indemnización

constitucional, en términos de lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así quedaran garantizados sus derechos laborales.

"Así es, el notificador comisionado elaboró instructivos en los que indicó acudir a notificar el acuerdo de seis de mayo de dos mil once, dentro del procedimiento administrativo 115/2011, no obstante no advertirse la existencia de un acuerdo de esa fecha, sin embargo, el contenido del acuerdo inserto en el instructivo, coincide con el auto de nueve de mayo de dos mil once.

"Empero, tampoco puede estimarse como un mero error del notificador en la cita de la fecha del acuerdo a notificar, porque en las certificaciones que aparecen al calce de cada uno de los instructivos, dirigidos a los quejosos, se advierte que en la certificación de la notificación que se señala se practicó a **********, se aludió se acudía a notificar un acuerdo del diecisiete de mayo de dos mil once, mientras que en el instructivo dirigido a **********, se estableció en la certificación que se notificaba un acuerdo de quince de abril de dos mil once.

"Luego, las reiteradas inconsistencias en las notificaciones practicadas en el procedimiento administrativo que concluyó con el cese y baja de los elementos de la policía del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, ahora quejosos, se trastocaron las garantías de audiencia y seguridad jurídica contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La garantía de audiencia, constituye la obligación de seguir el debido proceso con las formalidades correspondientes, para dar al particular la oportunidad de ofrecer las pruebas y realizar las alegaciones que resulten pertinentes, en esa medida, lo conducente es conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se reponga el procedimiento administrativo 115/2011, y se les notifique a partir del acuerdo de quince de abril de dos mil once, para otorgarles la oportunidad de acudir ante el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, a hacer valer las defensas que a su derecho correspondan.

"Lo anterior, en atención a que el procedimiento administrativo 115/2011, se siguió sin atender las debidas formalidades del procedimiento establecidas en el propio artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, que prevé la necesidad de notificar al oficial que se estime responsable de una falta, la que se le impute, y el derecho a que se le cite a una diligencia en

fecha y hora determinadas, en la que se producirán con todos los datos y circunstancias relativos a la infracción de que se trate y se le otorgue la oportunidad de tener el correspondiente derecho de audiencia para que produzca y alegue su defensa, y ya realizada tal audiencia con las precisadas formalidades, se dicte la resolución correspondiente.

"Lo que inclusive se indica en la propia acta de quince de abril de dos mil once, en la que se determinó al dar inicio al procedimiento administrativo, que se debían respetar las garantías de audiencia, certeza, legalidad y transparencia de los elementos ********** y ********** (foja 73 del juicio de garantías).

"Por tanto, a efecto de respetar la garantía de audiencia consagrada como derecho fundamental de los gobernados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone concederles a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se les dé oportunidad por parte de la autoridad administrativa de hacer valer lo que a su derecho corresponda, en el procedimiento administrativo 115/2011, que les instauró, y hecho lo cual, se resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda.

"Sin que, la presente determinación implique en este momento que se esté ordenando la reinstalación inmediata a los quejosos, ello en atención a la prohibición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental; empero, lo cierto es, que la autoridad administrativa de manera previa a ordenar su cese o baja como policías del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, deberá seguir un procedimiento en el que cumpla cabalmente con el requerimiento constitucional de otorgarles la garantía de audiencia, prevista, en el artículo 14 de la Carta Magna.

"Se afirma que no es factible que la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal tenga como efecto, la reinstalación de los quejosos, en atención, tanto al contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental, como a la jurisprudencia 2a./J. 103/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que determina que del aludido numeral se desprende que los miembros de las instituciones policiacas podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión, de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

"Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 103/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 310, del Tomo XXXII, julio de 2010, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro y texto:

"'SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE.—Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio.' (El destacado es nuestro)

"Además, es precisó indicar, que por ser parte de los reclamo, de los quejosos y hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo que se les siga, la autoridad administrativa deberá proceder a indemnizarlos, así como a pagarles las demás prestaciones a las que por ley tengan derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XXI; y B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En efecto, la indemnización deberá estar integrada por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 50, 80, 87 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, aplicable

supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, por disposición de su artículo 7o. De la misma forma, la indemnización deberá incluir cualquier otra prestación a que la parte quejosa tuviere derecho, así como los salarios y emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se decida su procedimiento administrativo; su restitución; o, en su caso, su baja sin justificación.

"Así es, las funciones que tienen encomendadas, los elementos de las instituciones de seguridad pública como el impetrante de garantías, revelan que su labor resulta de tal manera sustancial para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, en el ámbito territorial al que pertenecen, lo que justifica aún más que en caso de separación injustificada, la indemnización a que se refiere el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se calcule con los mismos conceptos que se integra la indemnización, tratándose de un empleado de los comprendidos en el apartado A del citado precepto constitucional.

"En consecuencia, lo conducente es conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad administrativa deje sin efectos todo lo actuado en el procedimiento administrativo 115/2011, y ordene la legal notificación del acuerdo de quince de abril de dos mil once, en que se inició tal procedimiento a los ahora quejosos, hecho lo cual, seguido con las debidas formalidades previstas en los artículos 14 de la Ley Fundamental y 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que legalmente corresponda.

"Lo anterior encuentra apoyo en la consideración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abordar el tema relativo al monto de la indemnización a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el amparo directo en revisión 1051/2011, estableció que '… si bien la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, pues a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces; la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundado por violación a los derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado …'

"Más aún, la Segunda Sala de la Corte Suprema del País, en sesión de primero de febrero de dos mil doce, resolvió la contradicción de tesis 489/2011,

entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en donde se asentó literalmente:

"'La tesis cuyos rubro y texto serán aprobados con posterioridad, se orienta en el sentido de que procede otorgar al miembro de alguna institución policial, las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, pudo recibir desde el momento en que se concretó su separación y hasta aquel en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho por virtud de la ilegalidad de la separación.'

"Sobre el tema en particular este órgano colegiado, en sesión plenaria de veinticinco de noviembre de dos mil once, aprobó las siguientes tesis aisladas, pendientes de publicación:

"'Clave: TC046001.10AD1

"'Rubro: POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.'

"'Texto: En la jurisprudencia 24/95, de rubro: «POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.» El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución Federal, como las leyes secundarias, reconocen un trato desigual en las relaciones laborales entre los particulares y para los miembros de las instituciones policiales. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro: «SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.» Sin embargo, las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días seis y diez de junio del año en curso, obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los artículos 1o. y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía y aplicación efectiva del derecho humano consistente en la ocupación, como una forma de proveerse de recursos económicos para la manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación y a eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar las reglas de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en relación con los policías o encargados de seguridad pública, debe estarse solo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague la indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio que los miembros de las instituciones policiales, que también resientan la separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica que respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato igual al que constriñe el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y para garantizarles una protección equivalente a los trabajadores en general; y, fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan la separación injustificada de su empleo, la indemnización debe calcularse conforme se establece en la Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen mejores prestaciones laborales.

"'Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

"'Precedente: Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y director administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad y

directora de Recursos Humanos, todas del Municipio de General Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Relator de la mayoría: Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.'

"'Clave: TC046002.10AD1

"'Rubro: POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES OBLIGA A QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA DE SU EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON EL MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS TRABAJADORES EN GENERAL.

"'Texto: Conforme al artículo 155 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, los integrantes de las instituciones policiales tienen el deber de velar por la seguridad y protección de los ciudadanos y de la integridad de sus bienes; proteger a los menores, ancianos, enfermos, débiles o incapaces que se encuentran en situaciones de riesgo, amenaza o peligro en su integridad física y corporal; atender sin dilación ni objeción alguna las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos; investigar y perseguir a delincuentes, así como apoyar en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres. Así, tales funciones son sustanciales para el orden, la estabilidad y la defensa de la sociedad a la que pertenecen, lo que constriñe a ésta a reconocerles el esfuerzo que desarrollan para mantener el orden social. En esos términos, los miembros pertenecientes a los cuerpos de seguridad que sufran la separación injustificada de su empleo deben ser indemnizados, en igualdad de trato, como los trabajadores en general pues, de no hacerlo, no solo se desconoce su labor trascendental en la que incluso está implícito el riesgo a su integridad, sino que se genera un trato evidentemente discriminatorio, al ni siquiera pagarles el mínimo de prestaciones que tienen aquellos trabajadores, y que prohíbe el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos.

"'Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

"'Precedente: Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y director administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad y directora de Recursos Humanos, todas del Municipio de General Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Relator de la mayoría: Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.'

"En cuanto a los efectos del fallo protector, similar criterio adoptó este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 557/2011 y 593/2011, resueltos en sesiones de catorce de octubre y ocho de diciembre de dos mil once, así como en los amparos en revisión 600/2011 y 618/2011, resueltos por unanimidad en sesiones de diecinueve de enero y diez de febrero, ambos de dos mil doce, respectivamente.

"En atención a lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos, 76, 77 y 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve:

"PRIMERO: Se revoca la sentencia recurrida.

"SEGUNDO: La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** y **********, en contra de los actos que reclamaron de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos indicados en el último de sus considerandos."

CUARTO.—El **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito**, al resolver el **amparo en revisión 168/2014**, en sesión de veinticuatro de julio de dos mil catorce, determinó lo siguiente:

"CUARTO.—Estudio. Los agravios analizados en su conjunto, bajo la causa de pedir, son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia impugnada y conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, acorde a las siguientes consideraciones jurídicas.

"En efecto, la recurrente hace valer en sus agravios diversas violaciones, no obstante todas giran en torno a un solo eje temático: la falta de competencia de la autoridad que intervino en la sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad de servidores públicos de los que derivan las órdenes de suspensión dictadas en su contra.

"Para proceder al estudio del problema jurídico señalado, se parte de que en su agravio identificado como primero, la recurrente alegó que el Juez no atendió el punto número dos de los conceptos de violación, en donde alegaba que el Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estaba derogado de acuerdo al artículo 13 transitorio de la Ley de Seguridad Pública para este Estado, en virtud de contraponerse con la mencionada ley, por lo que en esas condiciones si la Ley de Seguridad Pública no autoriza a la responsable a suspender un elemento policíaco (conforme a lo dispuesto en el artículo 221 de la citada legislación), entonces el citado reglamento no puede ser aplicado a los quejosos, debiendo por ello

la sentencia ser favorable, solicitando este Tribunal Colegiado estudie la omisión destacada.

"Por otra parte, en sus agravios segundo y tercero, la recurrente esencialmente plantea que, el Juez interpretó incorrectamente el artículo 198 Bis 31 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, así como la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, identificada con el número 50/2005, porque no se percató que la atribución para sustanciar los procedimientos de responsabilidad a los agentes de seguridad pública municipal de Guadalupe correspondía a la Unidad Administrativa de Asuntos Internos, y no así al secretario del ramo.

"En principio, atendiendo a la causa de pedir, se estima fundado el argumento de la inconforme por el que se duele de que el Juez de Distrito omitió analizar el segundo concepto de violación de su demanda de amparo; en el que esencialmente sostuvo que el Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estaba derogado conforme al numeral 13 transitorio de la Ley de Seguridad Pública para este Estado, en virtud de contraponerse con la mencionada ley, ya que si la referida ley no autorizaba a la responsable a suspender un elemento policiaco (conforme a lo dispuesto en el artículo 221 de la citada legislación), entonces el citado reglamento (que sí prevé dicha separación), no puede ser aplicado a los quejosos, debiendo por ello la sentencia serles favorable.

"Lo anterior, ya que del considerando quinto del fallo combatido (antes extractado en el considerando segundo del presente fallo), al cual nos remitimos en obvio de innecesarias repeticiones, se conoce que ciertamente el Juez de Distrito omitió pronunciarse en relación con el precisado argumento, de modo que atendiendo a la determinación de declarar fundada la pretensión de la parte quejosa, se procede a efectuar su análisis en forma conjunta con el resto de las expresiones de la recurrente, ya precisadas en párrafos anteriores.

"Al respecto, y como se anticipó, es sustancialmente fundado el agravio de la recurrente, ya que el marco jurídico aplicable al caso concreto, no confiere competencia al secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, para instruir el procedimiento administrativo sancionador y ordenar la suspensión de los oficiales de policía pertenecientes a dicha corporación, sin prejuzgar sobre el cumplimiento o no de los requisitos de permanencia.

"En principio, cabe precisar que, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León (vigente a partir del veintitrés de septiembre de dos mil

ocho), regula la materia de seguridad pública en el Estado y sus Municipios, como se advierte de su artículo 1o. que a la letra dispone:

"'Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto:

"'I. Regular la función de seguridad pública y la prestación de los servicios inherentes a cargo del Estado, los Municipios y las instancias auxiliares legalmente constituidas de conformidad a esta ley y a la normatividad aplicable;

"'(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010).
"'II. Establecer las bases generales de coordinación entre las autoridades federales, del Estado, de los Municipios y demás instancias de seguridad pública; y

"'III. Fijar las condiciones generales para la profesionalización y servicio de carrera del personal e instituciones preventivas de seguridad pública del Estado y de los Municipios.'

"Como se advierte, dicha legislación al regular la función de seguridad pública de los Municipios, es aplicable al caso concreto, por lo que en ese tenor, resulta procedente acudir a sus disposiciones para justificar la postura que aquí se sostiene.

"Precisado lo anterior, con el fin de resolver la cuestión planteada, se toma como punto de partida, que conforme a los numerales 198 Bis 8 y 198 Bis 9, de la Ley de Seguridad Pública para este Estado, la vigencia del nombramiento o designación de un servidor público de las instituciones policiales en el Estado de Nuevo León, se encuentra sujeta al cumplimiento de los 'requisitos de permanencia' establecidos en la ley; entre dichos requisitos se encuentra, para lo que aquí interesa, el de aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.[6]

---

[6] "Artículo 198 Bis 8. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente ley para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales."
"Artículo 198 Bis 9. Son requisitos de permanencia en las instituciones policiales: I. Cumplir con los requisitos de ingreso; II. No ser sujeto de pérdida de confianza; III. Cumplir con sus obligaciones, así como con las comisiones que le sean asignadas; IV. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; V. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, los cuales tendrán una vigencia de dos años; VI. Aprobar las evaluaciones del desempeño; VII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones

"Por su parte, el artículo 198 Bis 31, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado (adicionado el veintiocho de octubre de dos mil diez),[7] prevé las reglas esenciales del procedimiento administrativo, mediante el cual, se determina la remoción del personal de las instituciones policiales; y entre ellas, prescribe que dicho procedimiento se iniciará por instrucciones del titular de la dependencia o por propuesta de parte del superior jerárquico de quien dependan los servidores públicos que se proponga remover del cargo, y para efectos de que el área competente instruya el procedimiento correspondiente; no obstante, omite definir con claridad a qué área compete, en específico, la facultad de sustanciar los procedimientos de remoción de que se trata (por incumplimiento de los requisitos de permanencia en la institución).

"El numeral 198 Bis 31, en su fracción VII y último párrafo de la Ley de Seguridad Pública del Estado,[8] prevé que en forma previa o posterior a la celebración de la audiencia, se podrá determinar la suspensión del servidor público sujeto al procedimiento de remoción, siempre que así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, sin que con ello se prejuzgue sobre cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia; asimismo, que para efectos de lo dispuesto en dicho artículo, será de aplicación supletoria la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Nuevo León.

---

aplicables; VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; IX. No padecer alcoholismo; X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo; XI. Someterse a exámenes periódicos o aleatorios para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; XII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; XIII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o alternas (sic) dentro de un término de treinta días naturales; y XIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables."

[7] "Artículo 198 Bis 31. La determinación de la remoción del personal de las instituciones policiales se hará conforme a las disposiciones legalmente aplicables de acuerdo al siguiente procedimiento: I. Se iniciará por instrucciones del titular de la dependencia o por propuesta de parte del superior jerárquico de quien dependan los servidores públicos que se proponga remover del cargo y para efectos de que el área competente instruya el procedimiento correspondiente …"

[8] "Artículo 198 Bis 31. La determinación de la remoción del personal de las instituciones policiales se hará conforme a las disposiciones legalmente aplicables de acuerdo al siguiente procedimiento: …

"VII. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, se podrá determinar la suspensión del servidor público sujeto al procedimiento de remoción, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión no prejuzgará sobre cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. Si resultara que el servidor público suspendido conforme a esta fracción sí cumple con los requisitos de permanencia será restituido en el goce de sus derechos …

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Nuevo León."

"El numeral 221 de la referida Ley de Seguridad Pública Estatal, dispone en lo conducente, que la autoridad competente para imponer las sanciones administrativas, como son entre otras, la suspensión en el servicio, lo es la Comisión de Honor y Justicia.[9]

"El artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado (vigente a partir del veintitrés de septiembre de dos mil ocho), estatuye que se derogan las disposiciones de las leyes, reglamentos y demás ordenamientos que se opongan a dicho ordenamiento legal.[10]

"Y con motivo de la adición del artículo 198 al 198 Bis 34 de la referida legislación estatal (publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de octubre de dos mil diez), se emitieron los artículos cuarto y quinto transitorios, conforme a los cuales se derogan las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos que se opongan a dicho decreto y, se establece que los Municipios, entre otros, dispondrán de un término de hasta ciento ochenta días naturales para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes.[11]

"En el entendido de que tanto el artículo 198 Bis 31, como el cuarto y quinto transitorios del mencionado ordenamiento legal estatal son aplicables al caso, en atención a la fecha en que los actos reclamados tuvieron lugar (diecisiete de mayo de dos mil trece), puesto que ambos fueron adicionados a la ley de referencia en veintiocho de octubre de dos mil diez, sin que a la fecha de la emisión de los actos reclamados hayan sido derogados.

"Dispositivos transitorios que si bien no fueron citados por la quejosa como preceptos transgredidos, dicha omisión es subsanada por este órgano jurisdiccional en términos del artículo 76 de la actual Ley de Amparo,[12] a fin

---

[9] "Artículo 221. Las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y los cambios de adscripción, serán aplicados en una sola audiencia por el inmediato superior jerárquico, sin que para ello se deban observar las formalidades establecidas en esta ley y las demás sanciones se impondrán por la Comisión de Honor y Justicia en los términos que prevé este ordenamiento. …"

[10] "Artículo décimo tercero. Se derogan las disposiciones contenidas en leyes, reglamentos y demás ordenamientos que se opongan al presente decreto."

[11] "Cuarto. Se derogan las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos que se opongan al presente decreto.
"Quinto. El titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios, dispondrán de un término de hasta 180 días naturales para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes."

[12] "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."

de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero sin cambiarse con ello los hechos expuestos en la demanda.

"Conforme a ello, antes de acudir a las disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, que rige las relaciones del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, con sus servidores públicos policiales, es necesario identificar las bases y condiciones que establece la mencionada Ley de Seguridad para la regulación municipal en ese aspecto; es decir, si conforme a los lineamientos generales establecidos en dicha ley, es posible aplicar supletoriamente el referido reglamento municipal en la parte que confiere competencia al secretario de Seguridad de Guadalupe, Nuevo León, para instaurar y resolver el procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la aplicación de sanciones (entre ellas la de suspensión).

"Ahora bien, y dado que como ya se dijo, la Ley de Seguridad de referencia omite definir a qué área compete, en específico, la facultad de sustanciar los procedimientos de remoción de que se trata, atendiendo a lo señalado en el último párrafo de su artículo 198 Bis 31 (antes inserto), conforme al cual, para los efectos de las reglas relacionadas con el procedimiento administrativo mediante el cual se determina la remoción del personal de las instituciones policiales, por ende, será de aplicación supletoria la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

"De ahí que para resolver el problema jurídico planteado, resulte necesario acudir a lo dispuesto en los artículos 3, 54, 70, 73, 79, 80 y 81 de la mencionada ley de responsabilidad, que establecen lo siguiente:

"'Artículo 3o. Para los efectos y aplicación de la presente ley, son autoridades competentes:

"'I. El Congreso del Estado;

"'II. El Tribunal Superior de Justicia del Estado;

"'III. La contraloría interna, a la que se denominará la contraloría;

"'IV. Los Ayuntamientos, los presidentes municipales y los órganos de control interno de las administraciones públicas municipales;

"'V. La Auditoría Superior del Estado;

"'VI. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial;

"'VII. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo;

"'VIII. El Tribunal de Arbitraje del Estado;

"'IX. Las demás dependencias, entidades y organismos del sector paraestatal, y órganos de control interno pertenecientes al Gobierno del Estado o a sus Municipios, en el ámbito de las atribuciones que les otorga este ordenamiento; y

"'X. Las demás autoridades administrativas u órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.'

"'Artículo 54. Las sanciones administrativas consistirán en:

"'I. Suspensión del empleo, cargo o comisión conferidos y, en consecuencia, de la remuneración correspondiente. La suspensión se decretará por un término hasta de tres meses;

"'II. Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión de los servidores públicos tanto de confianza como de base, la cual se aplicará por la autoridad que sustancie el procedimiento de responsabilidad; para los servidores públicos sindicalizados, la destitución se demandará administrativamente por la autoridad mencionada y se resolverá en forma definitiva por el Tribunal de Arbitraje del Estado, conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado; e

"'III. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, por un periodo de uno hasta veinte años.'

"'Artículo 70. En los Municipios se entenderá por superior jerárquico, para los efectos de esta ley, el Ayuntamiento en Pleno, tratándose de los servidores públicos municipales de elección popular; y al presidente municipal para los demás servidores públicos municipales, quien se podrá auxiliar en los procedimientos de responsabilidades por los síndicos o por los órganos de control interno municipal. El Congreso del Estado aplicará las sanciones en los términos del artículo 63 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.'

"'Artículo 73. En los Poderes Legislativo y Judicial y en los Municipios, las sanciones por responsabilidad administrativa serán aplicadas por el superior

jerárquico, excepto las de carácter económico cuyo monto exceda de dos mil veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, las cuales serán aplicadas respectivamente por la Asamblea en Pleno del Congreso del Estado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tratándose de los Magistrados y del personal adscrito al propio tribunal y el Consejo de la Judicatura respecto de los demás servidores del Poder Judicial, y por los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias. El cobro de dichas sanciones se hará efectivo por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y Tesorerías Municipales, según corresponda.'

"'Artículo 79. El Poder Legislativo y el Poder Judicial establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar responsabilidades de sus servidores públicos, derivadas del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 50 de esta ley, así como para aplicar las sanciones contempladas en el presente capítulo, por conducto de su superior jerárquico, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y sus respectivos reglamentos.

"'Los Ayuntamientos y los presidentes municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los órganos y sistemas respectivos y aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a su ley orgánica y sus reglamentos.'

"'Artículo 80. Los servidores públicos deberán denunciar por escrito a la contraloría o a las autoridades competentes, los hechos que a su juicio impliquen incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos subordinados o superiores inmediatos.'

"'Artículo 81. En lo que respecta a las entidades y organismos del sector paraestatal, la denuncia a que se refiere el artículo anterior se presentará ante el director o su equivalente, quien enviará a la contraloría copia de la denuncia cuando a su juicio y tomando en cuenta la naturaleza de los hechos denunciados, la contraloría deba conocer del asunto o participar en las investigaciones.

"'Tratándose de denuncias por faltas administrativas en contra de servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial o de los Municipios, se presentarán ante sus respectivos superiores jerárquicos.'

"Como puede advertirse al realizar una interpretación armónica de los anteriores preceptos, la autoridad competente para sustanciar el procedimiento de remoción de los servidores públicos y para aplicar las sanciones

por responsabilidad administrativa, es el superior jerárquico, el cual, en el caso de los servidores públicos que no son electos popularmente, es el presidente municipal, quien puede auxiliarse de los síndicos o de los órganos de control interno.

"Por ello, conforme a lo dispuesto en la legislación supletoria, de ninguna manera puede ser competente el titular de la dependencia a que está adscrito el servidor público (como es el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León), puesto que la ley no faculta al presidente municipal o al Ayuntamiento a auxiliarse por autoridades distintas al síndico o a los órganos de control interno.

"En esa tesitura, se tiene que le asiste la razón a la quejosa, ya que el Juez interpretó indebidamente el artículo 198 Bis 31 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, pues estimó que la autoridad responsable fundó debidamente su competencia al citar dicho artículo y el diverso 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, el cual faculta expresamente al secretario de Seguridad Pública de esa municipalidad, para dictar la suspensión definitiva en contra de los miembros adscritos a dicha corporación, sin tomar en cuenta que para determinar si dicha autoridad era competente (conforme a lo dispuesto en el artículo 198 Bis 31), era necesario acudir a la legislación supletoria ya precisada; además, considerar que conforme al referido precepto cuarto transitorio de la Ley de Seguridad Pública del Estado, se derogan las disposiciones de las leyes, reglamentos y demás ordenamientos que se opongan a dicho ordenamiento legal.

"En efecto, al acudirse a la aplicación supletoria de la citada legislación de responsabilidades, se advierte que, contrario a lo resuelto, la incompetencia de la responsable por las razones ya mencionadas, pues el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, no puede ser catalogado como órgano de control interno.

"Aunado a ello, el propio artículo 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, establece que la autoridad competente para imponer las sanciones administrativas –como es el caso de la suspensión cautelar–, lo es la Comisión de Honor y Justicia, o en todo caso, de tratarse de un conflicto que se relacione con el funcionamiento de las instituciones de Seguridad Pública, sería la Unidad Administrativa de Asuntos Internos, disposición que entra en consonancia con la legislación supletoria, puesto que estas autoridades, sí son órganos de control interno, a diferencia de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que pone de manifiesto su incompetencia.

"Sin que para el caso sea necesario analizar lo aducido por la quejosa, en torno a que la autoridad competente lo es la Unidad Administrativa de Asuntos Internos, ya que en el caso ha quedado debidamente demostrada la falta de competencia del secretario de Seguridad Pública para instruir el procedimiento administrativo sancionador ya analizado.

"Incompetencia que se robustece por el hecho de que de conferirse competencia a dicho funcionario, se terminaría afectándose la imparcialidad en el dictado de las resoluciones, como lo refiere la quejosa, al presentarse un caso como el actual en donde el titular de la dependencia, que corresponde a la adscripción del funcionario sujeto al procedimiento, actúa como autoridad juzgadora y como parte a la vez.

"Así las cosas, al existir una antinomia entre lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León (que faculta expresamente al secretario de Seguridad Pública para instruir el procedimiento y dictar la suspensión definitiva en contra de los miembros adscritos a dicha corporación), y lo estatuido en los mencionados numerales de Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, aplicable de manera supletoria al artículo 198 Bis 31 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León; es inconcuso que resulta inaplicable al caso lo dispuesto en el citado reglamento, atendiendo al principio de primacía de ley, que consiste en que un reglamento no puede ir en contra de lo dispuesto en la ley de la materia.

"Adicionalmente, deben entenderse derogadas las disposiciones descritas en el reglamento, en cuanto se oponen a la ley de seguridad estatal de referencia, puesto que en su artículo cuarto transitorio, como ya se dijo, se dispone expresamente que quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos que se opongan al decreto en el cual se adicionaron, entre otros, el multi-referido artículo 198 Bis 31; ello, en virtud de que dicho decreto fue emitido en veintiocho de octubre de dos mil diez, y en ese momento estaba vigente el artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León (que se contrapone al mismo, en tanto que faculta expresamente al secretario de Seguridad Pública para instruir el procedimiento y dictar la suspensión definitiva en contra de los miembros adscritos a dicha corporación), cuyo contenido fue reformado el veintinueve de diciembre de dos mil nueve.

"Lo que se corrobora más aun cuando de conformidad con el artículo quinto transitorio de la referida Ley de Seguridad Pública Estatal,[13] los Municipios disponían de un término de hasta ciento ochenta días naturales contados a partir de la adición del referido artículo 198 Bis 31 (veintiocho de octubre de dos mil diez), para emitir o hacer las adecuaciones pertinentes a las disposiciones reglamentarias correspondientes, sin que en la especie ello hubiera acontecido.

"Por lo que si el referido reglamento no se ajustó a los lineamientos de la Ley Estatal de Seguridad Pública, por ende, dicho dispositivo dejó de regir desde el momento de emisión del decreto por el que se adicionó el numeral 198 Bis 31 y se emitió el aludido artículo cuarto transitorio, mayormente, se estima derogado al momento en que tuvieron lugar los actos que se reclaman y juzgan, como son los acuerdos de diecisiete de mayo de dos mil trece.

"Con base en lo expuesto, al quedar de manifiesto que el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe es incompetente para instruir el procedimiento administrativo de remoción a los quejosos y, por ende, para suspenderlos de sus cargos, en consecuencia, se revoca la sentencia recurrida y se concede a ********** y **********, el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable proceda al pago de la indemnización y demás prestaciones a que cada uno de ellos tenga derecho, en sujeción al numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho), del que se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación.[14]

---

[13] "Quinto. El titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios, dispondrán de un término de hasta 180 días naturales para emitir las disposiciones reglamentarias correspondientes."

[14] Tesis de jurisprudencia de la 21/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE.—Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"PRIMERO.—Se revoca la resolución recurrida.

"SEGUNDO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** y **********, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria."

QUINTO.—**Determinación de la existencia y la materia de la contradicción de tesis.** Se colman los requisitos para la existencia de la contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 225 y 226 de la Ley de Amparo,[15] porque de las ejecutorias transcritas se evidencia que los

---

instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio." Datos de localización: Novena Época. Registro digital: 1007226. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: *Apéndice* 1917, septiembre de 2011. Tomo IV. Administrativa, Primera Parte, SCJN Primera Sección Administrativa. Materias constitucional y laboral, tesis 306, página 352. Contradicción de tesis 21/2010. Entre las sustentadas por el Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Noveno Circuito. 23 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.

[15] "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de

Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en determinar si el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, es competente para sustanciar el procedimiento de remoción, cese o baja de los elementos de seguridad pública por incumplir con los requisitos de permanencia en el cargo, en estos términos:

El Primer Tribunal Colegiado emitió la resolución en un juicio de amparo en que los quejosos reclamaron la separación, remoción o baja como elementos de seguridad pública, derivada del procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado por el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, en atención al abandono de su servicio sin causa justificada, lo que motivó la pérdida de confianza, requisito de permanencia en la institución,

---

su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

"I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus Salas;

"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y

"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente.

"Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los Magistrados que los integran.

"La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias."

resuelto por la misma autoridad; y estimó que ese funcionario sí era competente para conocer y tramitar ese procedimiento, en términos del artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, sin que fuera óbice que el diverso 221 de la Ley de Seguridad Pública previera que cualquier controversia interna relacionada con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública estatales debería ser atendida y resuelta por las unidades administrativas de asuntos internos, porque en el caso no se trataba de una controversia interna relacionada con ese aspecto, sino de un procedimiento seguido al considerar que se cometió una falta que debía sancionarse con su baja o cese, aunado a que ese precepto establecía que las sanciones aplicadas a los servidores públicos serían en una sola audiencia por el inmediato superior jerárquico.

El Tercer Tribunal Colegiado emitió la resolución en un juicio de amparo, en que los quejosos reclamaron los acuerdos administrativos emitidos por el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, en los que se les instruyó en su calidad de oficiales de policía pertenecientes a dicha corporación, el procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de los requisitos de permanencia, ordenando su suspensión sin prejuzgar sobre ese aspecto; y estimó que ese funcionario no era competente para instruir ese procedimiento, porque la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 198 Bis 8, 198 Bis 9 y 198 Bis 31, fracción (sic), establecía que la vigencia del nombramiento o designación de un servidor público de las instituciones policiales se encontraba sujeta al cumplimiento de los requisitos de permanencia establecidos en dicha ley; y preveía que ese procedimiento se iniciará por el superior jerárquico de quien dependan dichos servidores públicos para efectos de que el área competente instruyera el procedimiento, sin que se definiera con claridad a qué área correspondía la facultad de sustanciar esos procedimientos; que antes o después de la audiencia se podrá determinar la suspensión del servidor público sujeto al procedimiento y que para efectos de lo ahí establecido sería supletoria la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León; y que según sus artículos 3, 54, 70, 73, 79, 80 y 81, era competente para sustanciar el procedimiento y para aplicar las sanciones, el superior jerárquico que, en caso de los servidores públicos que no son electos popularmente, era el presidente municipal, quien podía auxiliarse de los síndicos o de los órganos de control interno, sin que pudiera ser competente el aludido secretario porque la ley no faculta al presidente municipal o al Ayuntamiento, para auxiliarse

por autoridades distintas del síndico o a los órganos de control interno y que, en ese contexto, se interpretaron indebidamente, los artículos 198 Bis 31 de la Ley de Seguridad Pública mencionada y 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que faculta al secretario para dictar la suspensión definitiva contra los miembros de dicha dependencia, pues era necesario acudir a la legislación supletoria mencionada.

Aunado a que el artículo 221 de la Ley de Seguridad Pública establece que la autoridad competente para imponer las sanciones administrativas era la Comisión de Honor y Justicia, o la Unidad Administrativa de Asuntos Internos y que, al existir una antinomia entre el artículo 95 del reglamento interior y la ley de responsabilidades aludida, debía estarse a lo previsto en ésta por el principio de primacía de ley; máxime que las disposiciones del reglamento contrarias a la Ley de Seguridad Pública debían estimarse derogadas, en términos de su artículo cuarto transitorio.

En ese orden de ideas y con independencia de las cuestiones fácticas accidentales entre los casos concretos de los que derivaron los criterios aludidos, ambos tribunales examinaron un mismo punto de derecho consistente, como se dijo, en determinar si el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, es competente o no para sustanciar el procedimiento de remoción, cese o baja de los elementos de seguridad pública por incumplir con los requisitos de permanencia en el cargo, en términos de los artículos 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León y 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, entre otras disposiciones diversas o bien, si ello le correspondía a la Comisión de Honor y Justicia correspondiente o la Unidad Administrativa de Asuntos Internos; y arribaron a conclusiones contradictorias, pues uno determinó que el funcionario citado en primer término sí tenía competencia para ello, mientras que el otro sostuvo lo contrario, correspondiéndole a las otras dependencias mencionadas. **Aspectos que constituyen propiamente el punto de contradicción a dilucidar**.

Sirven como apoyo a lo anterior, en cuanto a que debe estimarse existente la contradicción independientemente de las diferencias fácticas de los asuntos de que derivaron los criterios jurídicos relativos, la jurisprudencia P./J. 72/2010 y la tesis aislada P. V/2011, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opues-

tos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."[16]

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO.—Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, determinó que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba centrarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la discrepancia. Asimismo, en la tesis P. XLVII/2009, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.', esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. En esa medida, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del mismo problema jurídico."[17]

SEXTO.—**Criterio que debe prevalecer.** Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta este Pleno en Materia Adminis-

---

[16] Novena Época. Registro digital: 164120. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7.

[17] Novena Época. Registro digital: 161666. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXIV, julio de 2011, materia común, tesis P. V/2011, página 7.

trativa del Cuarto Circuito, de conformidad con las consideraciones que a continuación se desarrollan:

Según quedó expuesto en el punto considerativo anterior, el tema de contradicción entre los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, consiste en determinar si el secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, es competente o no para sustanciar el procedimiento de remoción, cese o baja de los elementos de seguridad pública por incumplir con los requisitos de permanencia en el cargo, en términos de los artículos 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León y 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, entre otras disposiciones diversas, y en ese sentido, en el caso, se ve involucrado un tema que se relaciona íntimamente, a su vez, con la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, en lo general; circunscribiéndose a aquellos elementos que ejercen una función vinculada con la seguridad pública en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Entonces, para precisar el punto de partida que llevará a adoptar el criterio que debe regir con carácter de jurisprudencia en cuanto a ese tema de contradicción, es indispensable atender algunas de las consideraciones expuestas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver **por unanimidad de votos**, la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, promovidas por los diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, por el Partido del Trabajo y por el procurador general de la República.

Esas acciones de inconstitucionalidad se promovieron contra los artículos 4, 14, 16, 17, 58, 64, 81, 85, 96, 131, 143, 210, 216, 373, 374, 375, 386, 387, 388, 389 y 390 de la Ley Electoral de esa entidad, contenida en el Decreto Número 733/09 VI P.E., publicado en el Periódico Oficial de dicho Estado el doce de septiembre de dos mil nueve.

El procurador general de la República formuló un concepto de invalidez, en el sentido de que debían declararse inconstitucionales los artículos 386, 387, 388, 389 y 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, porque contemplaban la figura de la revocación del mandato popular, en términos que resultaban violatorios del artículo 109 de la Constitución Federal, el cual establece las bases a las que deberán ajustarse el Congreso de la Unión y las

Legislaturas Locales, **al expedir las leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos**, deslindando las diversas clases de responsabilidades que se permiten, esto es, las de carácter político, penal y administrativo, las cuales según ordena la propia disposición, se sustancian a través de procedimientos autónomos y previendo sanciones de diversa naturaleza, así como que se distinguen por los órganos que las harán efectivas.

En función de ello, el Pleno precisó, que ese argumento era parcialmente fundado; y para justificar tal afirmación, expuso que de los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 de la propia Constitución, se obtenía que existen tres tipos de responsabilidad en las que pueden incurrir los funcionarios o servidores públicos; entre ellas, **la administrativa**, que en general, refirió como aquel tipo de responsabilidad que se actualiza cuando los actos u omisiones de un funcionario o servidor público que afectaran la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, encontrándose prevista y regulada también en los artículos 109, fracción III y 113 del citado ordenamiento.

En cuanto a esta materia, la superioridad expuso, que en la Constitución no se especificaba qué autoridad era la facultada para sustanciar el procedimiento respectivo y decidir sobre la sanción correspondiente, sino que tal determinación se dejaba a las leyes de responsabilidades que al efecto se emitieran; pero que si se tomaba en consideración la naturaleza de las infracciones o responsabilidades administrativas y los fines que con su sanción se perseguía (salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de todo servidor público en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones), se infería que en concordancia lógica con dicha naturaleza, tanto el procedimiento, como la sanción, también debían ser **administrativos**, por lo que era al superior jerárquico del servidor público infractor, por regla general, o a un órgano específico del propio nivel de gobierno, al que incumbía corregir las irregularidades cometidas con el fin de preservar el correcto y eficiente servicio público que se debe prestar en la dependencia u organismo a su cargo, por lo que también correspondería a ellos sustanciar el procedimiento administrativo de responsabilidades y emitir la sanción respectiva.

Luego, las consideraciones reseñadas, que resultan obligatorias para este Pleno de Circuito en términos del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, contienen un principio esencial del derecho administrativo, atinente a que en la lógica de la naturaleza de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, tanto el procedimiento, como la sanción correspondientes debían compartir esa misma naturaleza y, por ende, a quien incumbe por regla general corregir las actuaciones cometidas es al superior jerárquico del infractor; sustanciar el procedimiento administrativo y emitir la sanción respectiva, salvo que existiera texto expreso en el que se determinaran las facultades para efectos de imposición de sanciones disciplinarias.

Con esta premisa en cuenta, ahora corresponde observar el marco constitucional y legal en que se desarrolla la actividad administrativa de los Municipios, en relación con el régimen laboral de los elementos adscritos a las corporaciones policiacas; las responsabilidades administrativas de que pueden ser sujetos y los órganos encargados de sustanciar los procedimientos relativos y emitir las resoluciones correspondientes.

El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[18] en su primer párrafo, establece categóricamente que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus

---

[18] "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"…
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"…
"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
"Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
"Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
"El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones."

propias leyes; y en el párrafo siguiente, se dispuso que tales servidores públicos podrán ser removidos de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, o bien, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones; y que no procederá su reincorporación aunque exista resolución jurisdiccional que declare injustificada su separación, procediendo sólo una indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho.

En este sentido, la disposición en comento excluye a los miembros de las instituciones policiales del régimen laboral que prevé el apartado B del artículo 123 constitucional y los diferencia del resto de los trabajadores al servicio del Estado, estableciendo un régimen de excepción, donde queda fijado que su relación, **es de naturaleza administrativa y se regirá por leyes propias**; tal como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/2013 (10a.),[19] que dice textualmente:

"AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.—Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversas jurisprudencias que los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen una relación de naturaleza administrativa con el poder público, debido a que al diferenciar a ese grupo de servidores públicos en las reglas que rigen las relaciones del Estado con sus trabajadores y precisar que deberán regirse por sus propias leyes, la citada disposición constitucional los excluye de la aplicación de las normas de trabajo para los servidores públicos del Estado. En congruencia con lo anterior, se concluye que la relación jurídica entre los agentes de policía y el Estado de Tabasco y sus Municipios es de naturaleza administrativa, pues si bien a las Legislaturas Estatales corresponde regular las relaciones de sus trabajadores, sobre las bases del artículo 123 constitucional, conforme al artículo 116, fracción VI, de la Norma Suprema, al hacerlo deben respetar la exclusión prevista en el apartado B, fracción XIII, de aquel numeral, respecto de los miembros de las instituciones policiales, tal como lo dispone el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco."

---

[19] Visible en la página 1092, del Libro XVIII, Tomo 2, marzo del 2013, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época.

Por otro lado, las fracciones I y II del artículo 115 constitucional,[20] establecen que los Municipios serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrados por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; y que estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, además de que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes

[20] "Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio libre, conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
"Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic. DOF 3 de febrero de 1983) alegatos que a su juicio convengan.
"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;
"II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
"Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación Ciudadana y vecinal.
"El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
"a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y el objeto de esas leyes será establecer, entre otras cosas, las bases generales de la administración pública municipal y las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Estas fracciones del aludido numeral, han sido interpretadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que, los Municipios tienen precisamente la posibilidad constitucional para emitir su propia normativa a través de bandos y reglamentos, para regular las actividades que corresponden al ámbito de competencia administrativa que les ha sido otorgada, como la seguridad pública, en general. Así se advierte de la jurisprudencia P./J. 134/2005,[21] que dice:

"MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO.—A partir de la reforma al citado precepto en mil novecientos ochenta y tres los Municipios han sido objeto de un progresivo desarrollo y consolidación de varias de sus facultades, como la de emitir su propia normatividad a través de bandos y reglamentos, aun cuando estaba limitada al mero desarrollo de las bases normativas establecidas por los Estados. Asimismo, como consecuencia de la reforma al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en mil novecientos noventa y cuatro, se otorgó al Municipio

---

"c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;
"d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
"Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores."

[21] Novena Época. Registro digital: 176928. Instancia: Pleno. Tesis: jurisprudencia, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXII, octubre de 2005, materia constitucional, tesis P./J. 134/2005, página 2070.

la potestad de acudir a un medio de control constitucional (la controversia constitucional), a fin de defender una esfera jurídica de atribuciones propias y exclusivas. Por último, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve trajo consigo la sustitución, en el primer párrafo de la fracción I del mencionado artículo 115, de la frase 'cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa', por la de 'cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa', lo que no es otra cosa sino el reconocimiento expreso de una evolución del Municipio, desde la primera y la segunda reformas enunciadas, y que permite concluir la existencia de un orden jurídico municipal."

En ese contexto, es necesario acudir a la legislación y reglamentación expedidas en el ámbito local, y como principio debe atenderse a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que en sus artículos 130, primer párrafo y 132, fracción I, inciso h),[22] establece que los Municipios del

[22] "Artículo 130. Los Ayuntamientos quedan facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal deberá expedir el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivos territorios, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación Ciudadana y vecinal.
"El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
"a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
"c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes."
"Artículo 132. Los Municipios tendrán las siguientes atribuciones:
"I. Prestar las funciones y servicios públicos siguientes:
"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
"b) Alumbrado público;
"c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
"d) Mercados y centrales de abastos;

Estado se encuentran facultados para emitir la reglamentación y todas aquellas disposiciones de observancia general que les permitan dentro de su respectivo territorio, regular las materias, entre otras, de seguridad pública, policía preventiva y tránsito.

"e) Panteones;
"f) Rastro;
"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
"h) Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía municipal y tránsito. La policía municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; e
"i) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera de los Municipios, los que previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden. Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.
"Las funciones y servicios públicos enumerados, que sean prestados por el Estado, por sí o de manera coordinada con los Municipios, podrán ser asumidos por el Municipio que corresponda. La autoridad municipal, previa aprobación del Ayuntamiento, deberá remitir al Gobierno del Estado la solicitud respectiva a fin de que éste disponga lo necesario para que la transferencia se realice de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la solicitud.
"En el caso de las funciones y servicios previstos por el inciso a) de esta fracción, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el Gobierno del Estado podrá solicitar al Congreso conservarlas en su ámbito de competencia, cuando se justifique de manera fehaciente que la transferencia del Estado al Municipio afecta en perjuicio a la población, su prestación. El Congreso del Estado resolverá lo conducente.
"II. Asimismo, los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
"a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; …
"b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
"c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia;
"Cuando la federación o el estado elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios.
"d) Autorizar, controlar y vigilar, por conducto del Ayuntamiento o por la autoridad que señalen las normas de carácter general, la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia y dentro de sus respectivos territorios;
"e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
"f) Otorgar licencias y permisos para construcciones por conducto del Ayuntamiento o por la autoridad que señalen las normas de carácter general;
"g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
"h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial; e
"i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales y del Estado.

Además, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en sus artículos 5, 26, fracciones I, IV y VIII, 27, fracciones II, IV y XIV; 70, 71, 80 y 81;[23] así como del Reglamento Orgánico de la

"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
"En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones que fueren necesarios.
"En el caso de que el crecimiento de los centros urbanos forme o tienda a formar una continuidad demográfica, los Municipios involucrados deberán, con apego a la ley, planear y regular de manera coordinada el desarrollo de los mismos. ..."

[23] "Artículo 5. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos de su competencia, los Ayuntamientos conformarán la organización administrativa de su circunscripción territorial, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley."
"Artículo 26. Son atribuciones y responsabilidades de los Ayuntamientos:
"a) En materia de régimen interior:
"(Reformada, P.O. 22 de julio de 2005)
"I. Prestar, en su circunscripción territorial, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado y de la presente ley, los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abastos; panteones, rastro; calles, parque y jardines y su equipamiento; seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva y tránsito, así como los demás que se determinen conforme a los ordenamientos señalados. Para tal efecto, en los casos en que los Municipios no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes, se tendrá a lo dispuesto por la presente ley y por las demás disposiciones aplicables. ...
"IV. Sujetar los servicios de seguridad pública a las disposiciones que sobre la materia se especifican en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Nuevo León y en sus leyes reglamentarias."
"Capítulo V
"De las facultades y obligaciones del presidente municipal"
"Artículo 27. El presidente municipal tiene a su cargo la representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, teniendo además, las siguientes facultades y obligaciones: ...
"II. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio la presente ley; las leyes, los reglamentos y demás disposiciones del orden municipal, estatal y federal, y conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes del Estado y de la Federación, así como con otros Ayuntamientos de la entidad. ...
"IV. Ordenar la promulgación y publicación de los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas del Ayuntamiento que deben regir en el Municipio y disponer la aplicación de las sanciones que corresponda. ...
"XIV. Disponer el nombramiento de los funcionarios del Municipio que le correspondan de conformidad a las disposiciones reglamentarias que emita el Ayuntamiento."
"Título tercero
"De la administración pública municipal
"Capítulo I
"De las dependencias administrativas"
"Artículo 70. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que estarán bajo las órdenes de su representante, el presidente municipal."

Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en los dispositivos 1, 3, 6, 10, 12, fracción VI y 18,[24] apreciados armónicamente, se advierte que el ejercicio de la administración pública municipal no se concentra única y exclusivamente a cargo del presidente municipal que tiene a su cargo

---

"Artículo 71. El presidente municipal, previo acuerdo de Ayuntamiento, podrá crear dependencias que le estén subordinadas directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las existentes, de acuerdo con las necesidades y capacidad financiera del Ayuntamiento."
"Capítulo IV
"De la delegación de facultades y la desconcentración administrativa"
"Artículo 80. Al frente de cada dependencia administrativa habrá un titular, con la denominación que determinen los reglamentos respectivos, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los servidores públicos que establezcan las disposiciones legales aplicables, conforme a los recursos y características de cada Municipio."
"Artículo 81. Corresponde originalmente a los titulares de las dependencias el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrá delegar en los servidores a que se refiere el artículo anterior, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o de los reglamentos o resoluciones del Ayuntamiento, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares."

[24] "Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer la estructura de la administración pública municipal la cual se conforma por las dependencias, organismos descentralizados, organismos auxiliares y unidades administrativas creadas para el despacho de los asuntos competencia del R. Ayuntamiento de Guadalupe, N.L. a través del C. Presidente municipal."
"Artículo 3. En el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades el C. Presidente municipal se auxiliará de las dependencias, organismos descentralizados, organismos auxiliares y unidades administrativas delegando las facultades que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de este reglamento, salvo aquellas que la constitución, las leyes y los reglamentos dispongan que deban ser ejercidas personalmente.
"El C. Presidente municipal, previo acuerdo del R. Ayuntamiento, podrá crear consejos, juntas, comités y comisiones administrativas las cuales son órganos auxiliares de la administración y deberán coordinarse en sus acciones con las dependencias que señale la ley."
"Artículo 6. Las designaciones de los secretarios, directores generales, así como los nombramientos de los titulares de los organismos descentralizados que no requieran aprobación del R. Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal, se harán por el C. Presidente municipal.
"En los casos de vacante del titular de alguna secretaría, dirección general o dirección, el C. Presidente municipal podrá nombrar mediante acuerdo, a una persona para que se haga cargo del despacho de la dependencia o unidad administrativa con carácter provisional hasta en tanto se nombre a quien ocupe en forma definitiva el cargo."
"Artículo 10. A los titulares de las dependencias de la administración pública municipal les corresponde originalmente el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero podrán delegar mediante oficio en sus subalternos las facultades consignadas en este reglamento, salvo aquellas que la Constitución Política vigente en el Estado de Nuevo León, las leyes, los reglamentos o las resoluciones del R. Ayuntamiento que dispongan deban ser ejercidas directamente por ellos."
"Artículo 12. Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de la administración pública municipal, el C. Presidente municipal se auxiliará de las siguientes dependencias administrativas:
"VI. Secretaría de Seguridad Pública …"
"Capítulo IX
"De la secretaría de seguridad pública"

la representación del Ayuntamiento; sino que, tanto la ley como el reglamento respectivo regulan la manera en que serán delegadas el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos, de manera que puedan realizarse de manera más efectiva, precisamente, para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento, facultando a dicho funcionario para que disponga el nombramiento

---

"Artículo 18. A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde preservar la tranquilidad, el orden público y la prevención de los delitos, así como instrumentar el adecuado y permanente flujo vehicular, la seguridad vial y el respeto de los reglamentos vigentes y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"I. Diseñar y definir políticas, programas y acciones, a efecto de preservar la tranquilidad y orden público municipal y en la prevención de delitos en el Municipio.
"II. Mantener contacto con los demás Municipios y con el Gobierno del Estado para el establecimiento de programas de protección, previo acuerdo del C. Presidente municipal.
"III. Prevenir y auxiliar a las personas en la protección de sus propiedades, posesiones y derechos.
"IV. Auxiliar dentro del marco legal correspondiente al ministerio público y a las autoridades administrativas y judiciales en el ámbito de su competencia, en los asuntos oficiales que le soliciten.
"V. Coordinarse con otras corporaciones policiales en el otorgamiento de protección a la Ciudadanía y en los operativos que lleguen a realizarse, previo acuerdo del C. Presidente municipal.
"VI. Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por razones de la hora, del lugar o de la distancia, no haya autoridad judicial que expida la orden de aprehensión y exista temor fundado de que el presunto responsable se sustraiga de la acción de la justicia, y ponerlos inmediatamente a disposición de las autoridades competentes.
"VII. Promover la organización y funcionamiento de consejos o comités consultivos municipales de seguridad pública.
"VIII. Contribuir a la seguridad pública de la sociedad, realizando tareas de prevención de ilícitos y labores de protección civil o auxilio de la población cuando se requiera.
"IX. Poner a disposición de las autoridades competentes a los menores infractores cuando sus conductas puedan entrañar la comisión de un delito o de una falta administrativa, conforme a las disposiciones legales aplicables.
"X. Coadyuvar con las instituciones federales, estatales y municipales para combatir la delincuencia, aplicando las leyes, reglamentos, decretos y convenios correspondientes, a fin de garantizar el orden jurídico y fomentar la participación Ciudadana en materia de seguridad pública.
"XI. Cooperar con las autoridades administrativas y judiciales en la conservación del Estado de derecho, coadyuvando en la administración de justicia, conforme a las leyes y reglamentos respectivos.
"XII. Planear, dirigir, organizar, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento de la Policía y Tránsito Municipal.
"XIII. Promover programas, acciones y políticas a efecto de optimizar el servicio de Seguridad Pública en el Municipio.
"XIV. Establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias que determinen la actuación de los elementos de la policía y tránsito municipal.
"XV. Vigilar el tránsito vehicular en el Municipio, así como respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables en materia de seguridad pública.
"XVI. Planear, dirigir y controlar la revisión de automóviles y vehículos automotores.
"XVII. Recomendar la instalación de señalamientos de tránsito de vehículos y de peatones en el Municipio.
"XVIII. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos inherentes o relacionados con el tránsito de vehículos y la aprehensión de los infractores.

de los funcionarios del Municipio que conformen las dependencias, organismos descentralizados y auxiliares, así como unidades administrativas.

En esa materia específica de la seguridad pública, el reglamento orgánico de referencia especifica que al secretario, como titular de la dependencia

---

"XIX. Imponer sanciones a las personas que infrinjan el reglamento de tránsito vigente.
"XX. Auxiliar a solicitud de las autoridades federales, estatales y de otros Municipios en la localización y persecución de los delincuentes.
"XXI. Participar en la innovación y avances tecnológicos, que permitan un mejor ejercicio de sus funciones.
"XXII. Promover la educación vial entre la población, particularmente entre los niños y los jóvenes escolares.
"XXIII. Promover la intervención de la población del Municipio, a fin de realizar propuestas para facilitar el tránsito vehicular.
"XXIV. Alentar la participación Ciudadana que permita la adecuada capacitación de los conductores de vehículos.
"XXV. Difundir mediante campañas, seminarios y juntas, las políticas y normas que atañen a la seguridad vial.
"XXVI. Fomentar en la población el respeto al peatón y a las normas de tránsito.
"XXVII. Coordinar y atender la vigilancia de los edificios e instalaciones municipales, del control de acceso de empleados y público en general, así como el control de ingresos y salidas de materiales, equipos y objetos en las instalaciones municipales.
"XXVIII. Llevar y mantener actualizado el padrón de las licencias de manejo que sean otorgadas por la autoridad municipal en los términos de la legislación vigente aplicable.
"XXIX. Promover ante la comunidad mediante medios publicitarios, la denuncia de conductas irregulares que llegare a presentar el personal de la secretaría.
"XXX. Derogada.
"XXXI. Derogada.
"XXXII. Derogada.
"XXXIII. Derogada.
"XXXIV. Iniciar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en relación con los elementos de policía y tránsito, a través de la Coordinación de Asuntos Internos, y en su caso turnar el expediente a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y resolución correspondiente.
"XXXV. Coadyuvar con la Comisión de Honor y Justicia en la recepción, tramitación y resolución de las quejas y denuncias presentadas en contra de elementos de policía y tránsito.
"XXXVI. Participar en la celebración de contratos y convenios relacionados con el ejercicio de sus atribuciones.
"XXXVII. Resguardar el archivo de la documentación relativa a los asuntos de su competencia.
"XXXVIII. Dar cumplimiento en lo que corresponde a sus funciones de acuerdo a lo dispuesto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
"XXXIX. Formular el anteproyecto del presupuesto anual de la Secretaría de Seguridad Pública, conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto, responsabilizándose por su cumplimiento, una vez autorizado.
"XL. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de las Unidades Administrativas su cargo (sic) y del ejercicio de las mismas.
"XLI. Las demás que le señalen como de su competencia las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes, así como aquello que específicamente le encomiende el C. Presidente municipal, informando oportunamente de las gestiones realizadas y resultados obtenidos.
"Para el despacho de los asuntos de su competencia, el secretario de Seguridad Pública se auxiliará de las siguientes direcciones: de policía; de tránsito; y de operaciones; así como de las coordinaciones, jefaturas y demás personal que sea necesario."

denominada Secretaría de Seguridad Pública, le corresponderá preservar la tranquilidad, el orden público y la prevención de los delitos; instrumentar el adecuado y permanente flujo vehicular, la seguridad vial y el respeto de los reglamentos vigentes, así como contribuir a la seguridad pública de la sociedad, realizando tareas de prevención de ilícitos y labores de protección civil o auxilio de la población cuando se requiera.

En ese mismo rubro, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintidós de septiembre de dos mil ocho,[25] con vigencia al día siguiente de su publicación, en sus artículos 1, 120, 122, 124, 130, 131 y 134,[26] dispone que su ámbito de aplicación

[25] Norma que abrogó la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado del día 24 de mayo de 1996 y sus reformas.

[26] "Artículo 1. La presente ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto:
"I. Regular la función de seguridad pública y la prestación de los servicios inherentes a cargo del Estado, los Municipios y las instancias auxiliares legalmente constituidas de conformidad a esta ley y a la normatividad aplicable;
"(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"II. Establecer las bases generales de coordinación entre las autoridades Federales, del Estado, de los Municipios y demás instancias de seguridad pública; y
"III. Fijar las condiciones generales para la profesionalización y servicio de carrera del personal e instituciones preventivas de seguridad pública del Estado y de los Municipios."
"Artículo 120. El presente título tiene por objeto establecer las bases para la organización y funcionamiento de las corporaciones de la policía estatal y de la policía y tránsito municipales.
"Se regirán, además, por este título, los elementos de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, centros de detención preventiva y del Centro de Internamiento para Adolescentes (sic) Infractores.
"La organización y funcionamiento de los agentes de Policía Ministerial se regirán de acuerdo a sus propias normas."
"(Reformado primer párrafo, P.O. 19 de enero de 2013)
"Artículo 122. Son autoridades de las instituciones policiales reguladas por este título:
"(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"I. El gobernador del Estado;
"(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"II. El secretario general de Gobierno;
"(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"III. El procurador general de Justicia;
"(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"IV. El secretario de Seguridad Pública;
"(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"V. Los subsecretarios y directores dependientes de la secretaría;
"(Reformada, P.O. 19 de enero de 2013)
"VI. Los titulares de las instituciones policiales del Estado;
"(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"VII. Los presidentes municipales; y
"(Reformada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"VIII. Los titulares de las instituciones policiales municipales."

es tanto en las corporaciones del Estado, así como de los Municipios y que, entre otras cuestiones, busca fijar las condiciones generales para la profesionalización y servicio de carrera del personal de tales instituciones de seguridad pública.

"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Al titular del Poder Ejecutivo del Estado le compete proteger la seguridad de las personas, sus bienes y derechos; así como mantener la paz, la tranquilidad y el orden público en todo el Estado, por conducto de las dependencias que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado deban ejercer esa atribución."
"(Reformado, P.O. 29 de octubre de 2010)
"Artículo 124. La policía municipal estará bajo el mando del presidente municipal, en los términos que prevé el artículo 115, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, deberá acatar las órdenes que, de acuerdo con lo establecido en la Ley Reglamentaria de la Fracción XVIII del "Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, le transmita el titular del Ejecutivo Estatal en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público."
"(Reformado, P.O. 19 de enero de 2013)
"Artículo 130. Las instituciones policiales de los Municipios adoptarán, en su ámbito territorial, un esquema de organización y funcionamiento para la consecución del orden, la paz y tranquilidad públicos; previniendo los delitos y las infracciones administrativas de acuerdo a la normatividad aplicable. Para ello, desplegarán acciones de proximidad, comunicación y participación directa con los Ciudadanos."
"(Reformado, P.O. 19 de enero de 2013)
"Artículo 131. La policía de los Municipios, tendrá las atribuciones siguientes:
"I. Prevenir las conductas delictivas e infracciones administrativas;
"II. Proteger la integridad física de las personas, sus propiedades, derechos y libertades;
"III. Vigilar el cumplimiento estricto de las Leyes y Reglamentos de Policía y Buen Gobierno;
"IV. Mantener el orden, la paz y tranquilidad de los lugares públicos;
"V. Vigilar las calles, parques, jardines, vías públicas, lotes baldíos, escuelas, plazas, comercios, mercados, panteones, zonas ecológicas, espectáculos públicos, y aquellas que sean de la misma naturaleza.
"Cuando derivado de la vigilancia de calles y vías públicas, o por alguna denuncia Ciudadana, la policía de los Municipios tome conocimiento de la existencia de lotes baldíos, que sean propicios para la comisión de actividades ilícitas, deberá dar inmediato aviso a la autoridad municipal competente, a efecto de proceder a la limpieza del lote baldío respectivo, en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado;
"VI. Proceder a la detención en los casos de flagrancia del delito y poner inmediatamente a disposición de las autoridades competentes a las personas detenidas, los bienes, objetos o instrumentos que se hayan asegurado y que se encuentren bajo su custodia; lo anterior, en los términos que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"VII. Auxiliar al Ministerio Público en sus tareas de conformidad con la legislación aplicable;
"VIII. Realizar la investigación para la prevención y disuasión de infracciones a la ley;
"IX. Llevar el registro y control estadístico de los delitos, las infracciones administrativas contenidas en los reglamentos de policía y buen gobierno;
"X. Instrumentar los programas, proyectos o acciones para garantizar la seguridad pública, la prevención del delito y de las infracciones administrativas en los Municipios;
"XI. Observar y hacer cumplir lo dispuesto en el Programa Estatal de Seguridad Pública, que corresponda al ejercicio de sus atribuciones;
"XII. Coordinar acciones con las instituciones policiales estatales para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta ley;

Establece las bases para la organización y funcionamiento de las corporaciones de las policías estatal y municipales, fijando que serán autoridades de esas instituciones, tanto los titulares del despacho que corresponda al Ejecutivo, así como de las propias corporaciones en sus ámbitos de administración; y prevé que la policía municipal se encuentra al mando del presidente municipal que corresponda, quien a su vez deberá acatar las órdenes que transmita el titular del Ejecutivo Estatal, **permitiendo que sean los Ayuntamientos quienes expidan la reglamentación que contenga las disposiciones jerárquicas, de estructura normativa, operativa, administrativa, principios de organización y funcionamiento, mandos y disciplina, entre otros, con sujeción a las disposiciones contenidas en la misma ley (artículo 134)**.

En el título noveno, denominado: "Del desarrollo policial", reformado en su denominación, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial el veintiocho de octubre de dos mil diez, precisa las bases y disposiciones generales para el desarrollo policial, el cual define como el conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados que comprenden la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario;[27]

"XIII. Ejecutar tareas de auxilio a la población en caso de accidentes, riesgos, siniestros, emergencias o desastres naturales, en apoyo a las instituciones de protección civil del Estado y de los Municipios;
"XIV. Colaborar con el organismo de participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública del Municipio, para el cumplimiento de sus objetivos, en los términos que prevé esta ley;
"XV. Coordinar acciones con los Comités de Participación Comunitaria de los Municipios;
"XVI. Solicitar a las autoridades de seguridad pública del Estado, cuando la circunstancia lo requiera, la intervención de sus grupos tácticos o unidades especiales de intervención o de reacción;
"XVII. Proceder inmediatamente a la búsqueda y ubicación de una persona reportada por cualquier medio como desaparecida, dando aviso sin dilación alguna a su superior inmediato, para los efectos que haya a lugar; y,
"XVIII. Las demás que señale esta ley."
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 134. Le corresponde a los Ayuntamientos de los Municipios expedir la reglamentación que contenga las disposiciones jerárquicas, de estructura normativa, operativas, administrativas, principios de organización y funcionamiento, de organización territorial, mandos administrativos y operativos, patrullaje, vigilancia, dirección y disciplina del régimen interno de la policía municipal, con sujeción a las disposiciones contenidas en esta ley."

[27] "(Reformada su denominación, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Título noveno
"Del desarrollo policial
"Capítulo primero
"De las disposiciones generales"
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 197. El desarrollo policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones policiales

y los artículos 198 Bis 4, 198 Bis 5, 198 Bis 8, 198 Bis 9,[28] prevén que existirán diversos requisitos que deberán satisfacer los interesados para el **ingreso** a las fuerzas policiacas, así como otros diversos y complementarios para su **permanencia** dentro de las instituciones; mientras que los artículos 198 Bis

---

y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos."

[28] "(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Capítulo tercero
"Del perfil de ingreso"
"(Reformado, P.O. 19 de enero de 2013)
"Artículo 198 Bis 4. El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en la universidad, el periodo de prácticas correspondiente y acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley."
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 198 Bis 5. Para ser policía en cualquiera de las modalidades previstas por esta ley, agente de tránsito, custodio o elemento de seguridad de los centros penitenciarios, preventivos, de reinserción social y en los de internamiento y de adaptación social de adolescentes se deberá contar con el perfil de ingreso y cumplir con los siguientes requisitos:
"I. Ser Ciudadano mexicano;
"II. Tener entre 19 y 35 años de edad;
"III. Estatura mínima para hombres 1.65 metros y mujeres 1.55 metros. Su peso deberá ser acorde con su estatura, según la Norma Oficial Mexicana de la materia y cumplir con el perfil médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
"IV. Contar con el certificado de educación que determina el Sistema Nacional de Seguridad Pública y su ley;
"V. No contar con tatuajes que resulten visibles aun vistiendo el pantalón y la camisola de manga corta de la policía;
"VI. Saber conducir automóviles y tener licencia de manejo vigente;
"VII. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
"VIII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público;
"IX. En su caso, cumplir con el servicio militar;
"X. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo;
"XI. Gozar de buena salud física y mental; además, deberá encontrarse en condiciones que por las actividades del curso de formación inicial no pongan en riesgo su integridad;
"XII. Firmar consentimiento para someterse a las evaluaciones de control de confianza que prevé este ordenamiento;
"XIII. Presentar y aprobar el proceso de evaluación de control de confianza; y
"XIV. Los demás requisitos que establezcan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legalmente aplicables."
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 198 Bis 8. La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente ley para continuar en el servicio activo de las instituciones policiales."
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 198 Bis 9. Son requisitos de permanencia en las instituciones policiales:

"I. Cumplir con los requisitos de ingreso;
"II. No ser sujeto de pérdida de confianza:
"III. Cumplir con sus obligaciones, así como con las comisiones que le sean asignadas:
"IV. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
"V. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, los cuales tendrán una vigencia de dos años;
"VI. Aprobar las evaluaciones del desempeño;
"VII. Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables;
"VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
"IX. No padecer alcoholismo;
"X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
"XI. Someterse a exámenes periódicos o aleatorios para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
"XII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público;
"XIII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o alternas (sic) dentro de un término de treinta días naturales; y
XIV. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables."
"(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Capítulo octavo
"De la terminación del nombramiento"
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 198 Bis 30. La terminación de los efectos del nombramiento de los integrantes de las instituciones policiales será:
"I. Ordinaria, que comprende:
"a) La renuncia;
"b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones;
"c) La jubilación; y
"d) La muerte.
"II. Extraordinaria, que comprende:
"a) La remoción del puesto, cargo o comisión por el incumplimiento de los requisitos de permanencia en la institución; y
"b) La terminación del ejercicio del cargo, debidamente emitida conforme a las disposiciones correspondientes."
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 198 Bis 31. La determinación de la remoción del personal de las instituciones policiales se hará conforme a las disposiciones legalmente aplicables de acuerdo al siguiente procedimiento:
"I. Se iniciará por instrucciones del titular de la dependencia o por propuesta de parte del superior jerárquico de quien dependan los servidores públicos que se proponga remover del cargo y para efectos de que el área competente instruya el procedimiento correspondiente;
"II. Las propuestas de remoción que se formulen deberán asentar los hechos que las sustenten y deberán de estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para presumir la necesidad de remoción del servidor público a que se refieran;
"III. Se enviará una copia de la propuesta de remoción y sus anexos al servidor público sujeto a la propuesta de remoción, para que en un término de cinco días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la propuesta, afirmándolos, negándolos y expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirá confesado todo aquello asentado en la propuesta de remoción sobre lo cual el servidor público sujeto del procedimiento no suscite explícitamente controversia, salvo prueba en contrario;
"IV. Una vez rendido el informe a que se refiere la fracción anterior, se citará personalmente al servidor público sujeto de la propuesta de remoción a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas si las hubiere, y en la que se recibirán sus alegatos por sí o por medio de su defensor;

21, 198 Bis 22, 198 Bis 23, 198 Bis 30 y 198 Bis 31,[29] regulan la organización jerárquica de las instituciones policiales y los mecanismos para la terminación de los nombramientos.

De ahí, se advierte que de manera extraordinaria podrán darse por terminados los efectos del nombramiento de los integrantes de las instituciones

---

"V. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, instruido, se turnará al titular de la dependencia a fin de que éste se encuentre en condiciones de resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, se remueva del puesto cargo o comisión al servidor público sujeto del procedimiento. La resolución se notificará personalmente al interesado;
"VI. Si de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen alguna responsabilidad a cargo del sujeto del procedimiento o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y se acordará la celebración de otra u otras audiencias; y
"VII. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, se podrá determinar la suspensión del servidor público sujeto al procedimiento de remoción, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión no prejuzgará sobre cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. Si resultara que el servidor público suspendido conforme a esta fracción sí cumple con los requisitos de permanencia será restituido en el goce de sus derechos.
"En el procedimiento establecido en este artículo tratándose de ofrecimiento de prueba confesional o testimonial por parte de la autoridad se desahogará por oficio.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, será de aplicación supletoria la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Nuevo León."

[29] "(Adicionada con los artículos que la integran, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Sección segunda
"De la organización jerárquica de las instituciones policiales"
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 198 Bis 21. El Estado y los Municipios establecerán la organización jerárquica de las instituciones policiales, considerando al menos las categorías siguientes:
"I. Comisarios;
"II. Inspectores;
"III. Oficiales; y
"IV. Escala básica."
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 198 Bis 22. Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las siguientes jerarquías:
"I. Comisarios:
"a) Comisario general;
"b) Comisario jefe; y
"c) Comisario.
"II. Inspectores:
"a) Inspector general;
"b) Inspector jefe; y
"c) Inspector.
"III. Oficiales:
"a) Subinspector;

policiales, por una parte, cuando no cumplan con los requisitos de permanencia en la institución [inciso a) del artículo 198 Bis 30, fracción I]; y se establece que en estos casos, en términos generales, **el titular de la dependencia** o a propuesta del superior jerárquico inmediato de quien dependa directamente el servidor público, podrá iniciar el procedimiento para remover del cargo, el cual será instruido por el **área competente**, informado el servidor público afectado por la propuesta de remoción y otorgada la garantía de audiencia.

Luego, según el invocado ordenamiento, el expediente administrativo correspondiente, **se turnará al titular de la dependencia a fin de que resuelva sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, remueva del puesto, cargo o comisión al servidor público sujeto al procedimiento** (198 Bis 31); en la inteligencia de que durante la sustanciación de ese procedimiento, se podrá determinar la **suspensión del servidor público sujeto al procedimiento**, siempre que así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones; y finalmente dispone que, **para efectos de lo dispuesto en ese numeral**, será de aplicación supletoria la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Nuevo León.

Por otro lado, el título décimo de la ley en comento, denominado "Del régimen disciplinario", en los artículos 218, 218 Bis 2, 219, 220, 221, 223, 226, 228, 229 230 y 232,[30] indica que la aplicación de sanciones corresponderá

"b) Oficial; y
"c) Suboficial.
"IV. Escala básica:
"a) Policía primero;
"b) Policía segundo;
"c) Policía tercero; y
"d) Policía."
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 198 Bis 23. Las instituciones policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos.
"Con base en las categorías jerárquicas señaladas en el artículo precedente, los titulares de las instituciones municipales, deberán cubrir, al menos, el mando correspondiente al quinto nivel ascendente de organización en la jerarquía.
"Las instituciones estatales, deberán satisfacer, como mínimo, el mando correspondiente al octavo grado de organización jerárquica.
"Los titulares de las categorías jerárquicas estarán facultados para ejercer la autoridad y mando policial en los diversos cargos o comisiones."

[30] "(Reformado y reubicado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 218. El régimen disciplinario regula la actuación de los integrantes de las instituciones policiales y comprende el cabal cumplimiento de los principios establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

cuando el servidor público cometa alguna falta a los principios de actuación previstos en la propia ley, o bien, en las normas disciplinarias específicas, las cuales se determinarán con independencia de otras que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa.

"La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las instituciones policiales, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.
"La disciplina comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y reglamentos, así como a los derechos humanos.
"La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados."
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Artículo 218 Bis 2. Los integrantes de las instituciones policiales, observarán las obligaciones previstas en el artículo 155 de esta ley y se abstendrán de realizar las conductas a que se refiere el artículo 158 de esta ley, con independencia de su adscripción orgánica."
"(Adicionada, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Sección segunda
"De las sanciones"
"Artículo 219. Se entiende por sanción la medida a que se hace acreedor el servidor público que cometa alguna falta a los principios de actuación previstos en esta ley y a las normas disciplinarias específicas. La aplicación de sanciones será proporcional a la gravedad y reiteración de la falta cometida.
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.
"(Adicionado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las instituciones policiales de conformidad con la legislación aplicable."
"Artículo 220. Las sanciones son:
"I. Apercibimiento: Que consiste en la llamada de atención que el superior jerárquico hace dirigida al responsable de la falta, exhortándolo a que evite la repetición de la misma, debiendo constar por escrito en el expediente del sancionado;
"II. Amonestación: Que consiste en acto mediante el cual el superior advierte al subalterno la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, invitándolo a corregirse y apercibiéndolo de la aplicación de una sanción mayor en caso de reincidencia. La amonestación puede ser de carácter pública o privada y deberá constar por escrito en el expediente del sancionado;
"III. Arresto: Que consiste en la reclusión hasta por treinta y seis horas, que sufre un subalterno por haber incurrido en faltas considerables o por haber acumulado tres o más amonestaciones en un lapso de un año. La orden de arresto deberá constar por escrito por la autoridad facultada para ello, describiendo el motivo y su duración. El arresto podrá permutarse por la asignación de tareas específicas a favor de la comunidad, distintas a las de su cargo y sin demérito de su dignidad, a elección de este;
"IV. Cambio de adscripción: Que consiste en la determinación que se haga cuando el comportamiento del elemento afecte notoriamente la disciplina y la buena marcha del grupo operativo al que esté asignado, o bien, cuando sea necesario para mejorar la prestación del servicio policial y que contribuya a mantener una buena relación e imagen con la propia comunidad;
"V. Suspensión temporal: Que consiste en aquella que procede en contra de aquellos elementos que incurran reiteradamente en faltas o indisciplinas que por su naturaleza no ameritan la destitución del cargo. En este caso, la suspensión será de quince días a tres meses.

"La sanción a que se refiere esta fracción será sin la percepción de su retribución; pero en el supuesto de que el elemento sea declarado sin responsabilidad por la instancia competente, se le pagaran las percepciones retenidas y se le reincorporará inmediatamente a su puesto, recuperando sus derechos de antigüedad;
"VI. Inhabilitación: Que consiste en el impedimento para desempeñar cualquier cargo público hasta por diez años;
"VII. Destitución del cargo: Que consiste en la separación y baja definitiva del elemento policial, por causa grave en el desempeño de sus funciones; lo anterior sin que proceda ningún medio de defensa legal ordinario para su reinstalación, quedando impedido para desempeñar el servicio policial; y
"VIII. Suspensión cautelar: Que consiste en la medida cautelar con el elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o de averiguación previa, por actos u omisiones graves que pudieran derivarse en presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar a la corporación policial o a la comunidad en general; será decretada por la autoridad que conozca del procedimiento interno, mediante resolución fundada y motivada y, en todo caso, respetando la garantía de audiencia del elemento sancionado.
"La suspensión cautelar subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento correspondiente, de conformidad a lo establecido en la ley. En caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le pagaran los salarios y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, por motivo de la suspensión cautelar, y en caso contrario se declarará la sanción que conforme a las constancias resulte procedente aplicar."
"Artículo 221. Las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y los cambios de adscripción, serán aplicados en una sola audiencia por el inmediato superior jerárquico, sin que para ello se deban observar las formalidades establecidas en esta ley y las demás sanciones se impondrán por la Comisión de Honor y Justicia en los términos que prevé este ordenamiento.
"Cualquier controversia interna que se relacione con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios deberá ser atendida y resuelta por las unidades administrativas de asuntos internos."
"Capítulo segundo
"De la aplicación del régimen disciplinario"
"(Reformado primer párrafo, P.O. 28 de septiembre de 2012)
"Artículo 223. Con independencia de la responsabilidad penal a que hubiere a lugar, serán motivo de la aplicación del apercibimiento como correctivo disciplinario las conductas descritas en las fracciones I, VI, XIV ó XXXIV del artículo 158, pero si esta conducta es reiterada en un lapso de treinta días naturales se aplicará la amonestación o incluso, el cambio de adscripción si con ella se afecta notoriamente la buena marcha y disciplina del grupo operativo al que este asignado. Si se acumulan tres o más amonestaciones en el lapso de un año será motivo de arresto.
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Las conductas descritas en las fracciones III, IV ó XXVIII del artículo 158 serán sancionadas con la suspensión temporal de sus funciones; pero si además de ello, se afecta notoriamente la buena marcha y disciplina del grupo operativo al que esté asignado, se le impondrá como medida el cambio de adscripción; si se produce un daño o perjuicio a la seguridad pública, a la institución a la que pertenece o a terceras personas será causa de destitución, según la gravedad del caso, independientemente de la responsabilidad en que pueda incurrir.
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Quienes incurran en las conductas prevista (sic) en las fracciones VII ó XXXII del artículo 158, se le aplicará como sanción la suspensión temporal o la destitución del cargo según corresponda por la naturaleza o gravedad del caso.
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Las conductas descritas en las fracciones V ó XXII serán motivo de la aplicación como sanción de la suspensión temporal de sus funciones, pero si se realiza con la pretensión de obtener un lucro o beneficio indebido será causa de destitución, según la gravedad del caso.

Expresa que entre las sanciones que pueden imponerse, se encuentran la suspensión temporal y la destitución del cargo; que un servidor público será suspendido cuando incurra en faltas reiteradas o indisciplinas que no ameriten la destitución del cargo; y que será destituido, es decir, separado o dado de baja de manera definitiva por **causa grave en el desempeño de sus funciones**.

"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Serán motivo de imposición de separación temporal o destitución, según la naturaleza o gravedad del caso, las conductas previstas en las fracciones II, XII, XVII y XXXIII del artículo 158.
"(Reformado, P.O. 21 de diciembre de 2011)
"Son causas de destitución las conductas descritas en los incisos VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, ó XXXI del artículo 158, y la del artículo 159.
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"También son causas de destitución e inhabilitación:
"a) Dar positivo en los exámenes toxicológicos que se practican institucionalmente, salvo en los casos de prescripción médica para el tratamiento y control de una enfermedad;
"b) No acreditar los exámenes de control de confianza; o
"c) Ser condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria como responsable en la comisión de algún delito doloso."
"(Reformado, P.O. 19 de enero de 2013)
"Artículo 226. Para el conocimiento, trámite y resolución de las quejas o denuncias que se interpongan en relación con la actuación de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se crea la Comisión de Honor y Justicia, a cargo de dicha dependencia, integrada por cinco miembros designados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y un representante de organizaciones de la sociedad civil organizada, vinculado con temas afines a la seguridad pública, el cual fungirá como invitado especial, con derecho a voz y no a voto.
"La participación del representante de las organizaciones de la sociedad civil organizada será a título de colaboración Ciudadana y su desempeño tendrá carácter honorífico, rigiéndose por principios de buena fe y propósitos de interés general, por lo que no percibirá remuneración alguna por el desempeño de sus funciones ni será considerado servidor público.
"En cada Municipio, en los términos de su reglamentación respectiva, se crearán comisiones con iguales fines. La Procuraduría General de Justicia aplicará las disposiciones de su ley orgánica en lo que no se oponga al presente ordenamiento."
"Artículo 228. La Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y las comisiones o unidades administrativas análogas de la Procuraduría General de Justicia y de los Municipios, remitirán a la Dependencia de Control Interno del Gobierno del Estado copia de las resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones, para el efecto de inscribirlas en el Registro de Servidores Públicos sancionados e inhabilitados o para efectos laborales en los términos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, dejando constancia de ello en el expediente respectivo para los efectos de los artículos 65 fracción V y 66 de este ordenamiento."
"Artículo 229. La Comisión de Honor y Justicia, impondrá las sanciones administrativas a través del siguiente procedimiento:
"I. Las quejas o denuncias deberán presentarse bajo protesta de decir verdad por comparecencia o por escrito. La persona que presente por escrito la queja o denuncia deberá ser citada para que la ratifique, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo así y de no presentar en un término de cinco días hábiles elementos de prueba que hagan presumir la existencia de los hechos referidos en su promoción, se desechará la queja o denuncia correspondiente, quedando a salvo los derechos de iniciar el procedimiento de oficio, considerando la naturaleza y gravedad de la falta cometida;
"II. En caso de que el quejoso o denunciante cumpla con lo previsto en este artículo, se procederá a iniciar el procedimiento de responsabilidades. Se notificará el acuerdo de inicio del procedimiento al servidor público, haciéndole saber la infracción o infracciones que se le imputan;

Asimismo, que cuando se trate de las **sanciones** de apercibimiento, amonestación, arresto y cambios de adscripción, serán aplicados en una sola audiencia **por el inmediato superior jerárquico**, sin que para ello deba observar las formalidades establecidas en la ley. También establece que las **demás sanciones** se impondrán por la Comisión de Honor y Justicia, en los términos que prevé el mismo ordenamiento para los casos de las corporaciones del Estado y, en cada Municipio, acorde con su reglamentación; y que las controversias internas que se relacionen con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública serán atendidas por las unidades administrativas de asuntos internos.

En ese contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 referido,[31] la aplicación del **régimen disciplinario** será para los casos en que

"III. En el mismo acuerdo de inicio se señalará el lugar, día y hora para la verificación de una audiencia que deberá realizarse dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación. Se le indicará al presunto responsable que en la audiencia podrá alegar verbal o por escrito lo que a su derecho convenga respecto a la infracción o infracciones que se le imputa, y tendrá derecho a ofrecer las pruebas y alegatos de su intención. La comisión podrá fijar un término no mayor de diez días para el desahogo de las pruebas;
"IV. En cualquier momento, previo o posterior al acuerdo de inicio al que se refiere la fracción anterior, se podrá determinar la suspensión cautelar de su cargo, empleo o comisión, al presunto responsable si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, previa autorización de quien haya hecho la designación del servidor público;
"V. Si celebrada la audiencia se advierten elementos que impliquen la configuración de otras causales de responsabilidad administrativa del presunto responsable o de otros servidores públicos, se podrá disponer la práctica de investigaciones y mediante diverso acuerdo de inicio fundado y motivado se emplazará para otra u otras audiencias, con las mismas formalidades señaladas en la fracción II de este artículo; y
"VI. Cerrada la instrucción, se resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad y en su caso se impondrán al infractor las sanciones correspondientes, debiéndose notificar la resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al servidor público responsable y a su jefe inmediato."
"Artículo 230. Podrá la comisión iniciar de oficio el procedimiento a que se refiere el artículo anterior tratándose de conductas graves, que afecten la seguridad pública o bien, que causen descrédito o perjuicio a la institución a la que pertenece el servidor público infractor.
"Asimismo, si dentro del procedimiento la comisión advierte la posible comisión de algún delito previsto en la legislación penal en vigor, deberá comunicar de inmediato a la institución del Ministerio Público que corresponda, remitiendo las constancias respectivas."
"Artículo 232. Las resoluciones que dicte la Comisión de Honor y Justicia, deberán cumplir con las exigencias y formalidades establecidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo no previsto por la ley, se fundará en los principios generales del derecho."

[31] "Artículo 223. Con independencia de la responsabilidad penal a que hubiere a lugar, serán motivo de la aplicación del apercibimiento como correctivo disciplinario las conductas descritas en las fracciones I, VI, XIV ó XXXIV del artículo 158, pero si esta conducta es reiterada en un lapso de treinta días naturales se aplicará la amonestación o incluso, el cambio de adscripción si con ella se afecta notoriamente la buena marcha y disciplina del grupo operativo al que esté asignado. Si se acumulan tres o más amonestaciones en el lapso de un año será motivo de arresto.

el elemento policiaco incurra en alguna de las **conductas prohibidas en el artículo 158 de la misma ley**, cuando en función de la gravedad y clasificación hecha por la misma ley, su imposición corresponderá al superior jerárquico, o bien, a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento para el agente investigado; y esta última será la encargada de imponer las sanciones administrativas, siguiendo para ello, un procedimiento en el que después de satisfacer la garantía de audiencia y defensa del elemento de policía, pueda establecer **la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa**.

En suma, estas disposiciones jurídicas permiten advertir que, **en términos generales**, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, determina que un elemento de seguridad pública puede ser suspendido y, eventualmente, separado de su cargo, a través de dos procedimientos distintos, a saber: 1. Por virtud de la **terminación del nombramiento ante el incumplimiento de los requisitos de permanencia** en la institución; y, 2. Como **sanción por cometer alguna de las conductas prohibidas en la propia ley** y descritas en el artículo 158, o bien, **a las disposiciones reglamentarias relativas**.

"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Las conductas descritas en las fracciones III, IV ó XXVIII del artículo 158 serán sancionadas con la suspensión temporal de sus funciones; pero si además de ello, se afecta notoriamente la buena marcha y disciplina del grupo operativo al que esté asignado, se le impondrá como medida el cambio de adscripción; si se produce un daño o perjuicio a la seguridad pública, a la institución a la que pertenece o a terceras personas será causa de destitución, según la gravedad del caso, independientemente de la responsabilidad en que pueda incurrir.
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Quienes incurran en las conductas prevista (sic) en las fracciones VII ó XXXII del artículo 158, se le aplicará como sanción la suspensión temporal o la destitución del cargo según corresponda por la naturaleza o gravedad del caso.
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Las conductas descritas en las fracciones V ó XXII serán motivo de la aplicación como sanción de la suspensión temporal de sus funciones, pero si se realiza con la pretensión de obtener un lucro o beneficio indebido será causa de destitución, según la gravedad del caso.
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"Serán motivo de imposición de separación temporal o destitución, según la naturaleza o gravedad del caso, las conductas previstas en las fracciones II, XII, XVII y XXXIII del artículo 158.
"(Reformado, P.O. 21 de diciembre de 2011)
"Son causas de destitución las conductas descritas en los incisos VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, ó XXXI del artículo 158, y la del artículo 159.
"(Reformado, P.O. 28 de octubre de 2010)
"También son causas de destitución e inhabilitación:
"a) Dar positivo en los exámenes toxicológicos que se practican institucionalmente, salvo en los casos de prescripción médica para el tratamiento y control de una enfermedad;
"b) No acreditar los exámenes de control de confianza; o
"c) Ser condenado mediante sentencia que haya causado ejecutoria como responsable en la comisión de algún delito doloso."

Hecha esta precisión, conviene atender al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León,[32] que en su artículo 18, fracciones XIV, XXXIV y XXXV,[33] establece que a la **Secretaría de Seguridad Pública** le corresponde establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias que determinen la actuación de los elementos de la policía y tránsito municipal; **iniciar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en relación con los elementos de policía y tránsito, a través de la Coordinación de Asuntos Internos, y en su caso**, turnar el expediente a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y resolución correspondiente; y coadyuvar con ésta en la recepción, tramitación y resolución de las quejas y denuncias presentadas en contra de elementos de policía y tránsito.

Asimismo, el Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León,[34] en sus artículos 2, 9, 92, 93, 94 y 95,[35] establece que se entenderá por falta discipli-

---

[32] Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 30 de noviembre de 2009. Última reforma publicada el 2 de mayo de 2014.

[33] "Capítulo IX
"De la Secretaría de Seguridad Pública"
"Artículo 18. A la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde preservar la tranquilidad, el orden público y la prevención de los delitos, así como instrumentar el adecuado y permanente flujo vehicular, la seguridad vial y el respeto de los reglamentos vigentes y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"…
"XIV. Establecer las disposiciones, normas operativas, administrativas y disciplinarias que determinen la actuación de los elementos de la policía y tránsito municipal.
"…
"XXXIV. Iniciar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en relación con los elementos de policía y tránsito, a través de la Coordinación de Asuntos Internos, y en su caso turnar el expediente a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y resolución correspondiente.
"…
"XXXV. Coadyuvar con la Comisión de Honor y Justicia en la recepción, tramitación y resolución de las quejas y denuncias presentadas en contra de elementos de policía y tránsito."

[34] Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 29 de diciembre de 2009.

[35] "Capítulo I
"Disposiciones generales"
"Artículo 2. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
"…
"e) Falta disciplinaria, a la acción u omisión efectuada por algún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública; en virtud de haber actuado en contravención del presente reglamento o los ordenamientos legales que rigen su actuación."
"Artículo 9. Las autoridades encargadas de hacer cumplir el presente reglamento además de las que imponga la ley, son jerárquicamente y en su orden como sigue:
"a) El Republicano Ayuntamiento.
"b) Presidente municipal.

naria, a la acción u omisión efectuada por algún elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, en virtud de haber actuado en contravención del propio reglamento o los ordenamientos legales que rigen su actuación; y que las autoridades encargadas de hacer cumplir ese reglamento además de las que imponga la ley, son jerárquicamente y en su orden como sigue: el Republicano Ayuntamiento, el presidente municipal, el secretario del R. Ayuntamiento, secretario de Seguridad Pública, director administrativo, director de Policía, director de Tránsito y director de Protección Civil y Bomberos.

Asimismo, establece que las faltas en que incurran los elementos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, serán sancionadas para los efectos de la conservación de la disciplina y una buena corrección en el comportamiento de las personas; entendiéndose como correctivo disciplinario toda sanción aplicada **por cualquier superior jerárquico o de cargo**, con el

---

"c) Secretario del R. Ayuntamiento.
"d) Secretario de Seguridad Pública.
"e) Director administrativo.
"f) Director de policía.
"g) Director de tránsito.
"h) Director de Protección Civil y Bomberos."
"Artículo 92. Las faltas en que incurran los elementos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública serán sancionadas para los efectos de la conservación de la disciplina y una buena corrección en el comportamiento de las personas."
"Artículo 93. Se entenderá como correctivo disciplinario toda sanción aplicada por cualquier superior jerárquico o de cargo, con el fin de corregir las faltas u omisiones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, teniendo como finalidad perfeccionar y fortalecer la disciplina de los elementos que la integran."
"Artículo 94. Las mencionadas sanciones podrán ser de acuerdo a la gravedad y consecuencias de la falta cometida, pudiendo aplicarse las siguientes:
"a) Simple amonestación. Consistente en la llamada de atención escrita o verbal que se aplica a cualquier elemento como resultado de su falta, omisión o conducta inapropiada.
"b) Arresto hasta por 36 horas. Privación temporal de la libertad sin pérdida de derechos, se impone con o sin perjuicio del servicio según la gravedad de la falta. Su duración se establecerá por el superior jerárquico que lo aplique de acuerdo a la falta u omisión cometida.
"c) La suspensión provisional. Suspensión temporal en labores de hasta 30 días que no significa cese, con la pérdida de su percepción salarial por el lapso de la suspensión.
"d) Suspensión definitiva sin responsabilidad para el Municipio. Se aplicará por incumplimiento grave de las obligaciones que establecer (sic) el presente reglamento y la ley que regula la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública."
"Artículo 95. Para la aplicación de sanciones el secretario de Seguridad Pública, una vez que se tenga conocimiento de alguna infracción al presente reglamento, procederá a notificar al oficial que se estime responsable, la falta que se le imputa y le citará a una diligencia fecha y hora determinada, en la que se producirán con todos los datos y circunstancias relativos a la infracción de que se trate, y se le dará oportunidad al propio interesado para que en su derecho de audiencia produzca su defensa y alegue a su favor lo que estime conveniente. Concluida ésta diligencia, en la que deberán tomarse en cuenta los datos comprobatorios que puedan estimarse, se dictará la resolución que corresponda."

fin de corregir las faltas u omisiones de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, teniendo como finalidad, perfeccionar y fortalecer la disciplina de los elementos que la integran.

También, que las mencionadas sanciones podrán ser de acuerdo a la gravedad y consecuencias de la falta cometida, pudiendo aplicarse la simple amonestación, consistente, en la llamada de atención escrita o verbal que se aplica a cualquier elemento como resultado de su falta, omisión o conducta inapropiada; el arresto hasta por 36 horas, consistente en la privación temporal de la libertad sin pérdida de derechos, que se impone con o sin perjuicio del servicio según la gravedad de la falta y cuya duración se establecerá por el superior jerárquico que lo aplique de acuerdo a la falta u omisión cometida; la suspensión provisional o temporal en labores de hasta treinta días, que no significa cese, con la pérdida de su percepción salarial por el lapso de la suspensión; la suspensión definitiva sin responsabilidad para el Municipio, aplicada por **incumplimiento grave** de las obligaciones que establece el reglamento y la ley que regula la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y finalmente, que para la aplicación de sanciones, **el secretario de Seguridad Pública**, una vez que se tenga conocimiento de alguna infracción al reglamento, procederá a notificar al oficial que se estime responsable la falta que se le imputa y le citará a una diligencia en fecha y hora determinadas, la que se producirá con todos los datos y circunstancias relativos a la infracción de que se trate, y se le dará oportunidad al propio interesado para que en su derecho de audiencia produzca su defensa y alegue a su favor lo que estime conveniente; que concluida esta diligencia, en la que deberán tomarse en cuenta los datos comprobatorios que puedan estimarse, se dictará la resolución que corresponda.

En suma, acorde con la normativa examinada, ante el incumplimiento de requisitos de **permanencia**, la determinación de la remoción se iniciará **por instrucciones del titular de la dependencia** o a propuesta del superior jerárquico de quien dependa, conforme al procedimiento previsto en el artículo 198 Bis 31, en que se deberá hacer saber al servidor público la propuesta de remoción; otorgarle el plazo de cinco días hábiles para que formule un informe sobre los hechos y rinda pruebas; citarlo a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos; y verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, el **titular de la dependencia** resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia y, en su caso, removerá del puesto, cargo o comisión al servidor público sujeto del procedimiento.

Luego, de la interpretación sistemática de las disposiciones referidas se pone de manifiesto que, al secretario de Seguridad Pública para el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en términos de la Ley de Seguridad Pública para el Estado y las disposiciones reglamentarias a que se ha hecho alusión, como titular de dicha dependencia, tiene a su cargo sustanciar y coadyuvar en los **procedimientos de responsabilidad administrativa, en relación con los elementos de seguridad de la corporación a través de la Coordinación de Asuntos Internos, pudiendo también en el curso del procedimiento suspender al servidor público sujeto; y, en su caso**, turnar el expediente a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y resolución correspondiente, además de que está facultado para **imponer correctivos disciplinarios** a los elementos integrantes de la corporación, con el fin de corregir las faltas u omisiones en que incurran los agentes, para lograr perfeccionar y fortalecer la disciplina de los elementos que la integran, en la inteligencia de que las sanciones aplicadas como **correctivo disciplinario**, serán de acuerdo a la gravedad y consecuencia de la falta cometida y podrán ser, simples amonestaciones, arrestos hasta por treinta y seis horas, suspensión provisional hasta por treinta días que no significa cese, sino sólo la pérdida de su percepción salarial en ese lapso; y la suspensión definitiva que sólo se aplicará por incumplimiento grave de las obligaciones, **siguiendo al efecto el procedimiento que establece la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León**.

En ese sentido, del marco normativo analizado se deduce el principio general establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se hizo alusión en un inicio, consistente en que en la lógica de la naturaleza de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, tanto el procedimiento como la sanción correspondientes deben compartir esa misma naturaleza y, por ende, a quien incumbe corregir las actuaciones cometidas, corresponde por regla general al superior jerárquico del infractor, así como sustanciar el procedimiento y emitir la sanción respectiva; y ello es precisamente en el sentido de que tratándose de los procedimientos de terminación del nombramiento, como lo es la remoción del puesto, cargo o comisión por el incumplimiento de los **requisitos de permanencia** en la institución, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, como titular de esa dependencia y también superior jerárquico de los elementos de seguridad pública relativos, acorde con la reglamentación al respecto, es la autoridad legalmente competente para iniciar el procedimiento por conducto de la Coordinación de Asuntos Internos y resolver sobre el cumplimiento de tales requisitos de permanencia y, en su caso, decretar la separación del elemento correspondiente; además de que las disposiciones referidas también permiten afirmar que en los supuestos en que se trate de simples imposiciones de correctivos o medidas

disciplinarias, el secretario en mención también será competente para imponerlas.

Ahora bien, la normativa analizada parece dar la impresión de que existe una antinomia entre lo dispuesto por el artículo 221 de la Ley de Seguridad Pública,[36] que establece que las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y los cambios de adscripción, serán aplicados en una sola audiencia por el inmediato superior jerárquico, sin que para ello se deban observar las formalidades establecidas en esta ley y que las demás sanciones se impondrán por la Comisión de Honor y Justicia en los términos que prevé este ordenamiento; con lo previsto por el diverso 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León,[37] conforme al cual, para la aplicación de sanciones el secretario de Seguridad Pública, una vez que se tenga conocimiento de alguna infracción al indicado reglamento, procederá a notificar al oficial que se estime responsable, la falta que se le imputa y le citará a una diligencia en fecha y hora determinadas, que se producirá con todos los datos y circunstancias relativos a la infracción de que se trate, y se le dará oportunidad al propio interesado para que en su derecho de audiencia produzca su defensa y alegue a su favor lo que estime conveniente y que concluida esta diligencia se dictará la resolución que corresponda.

De lo anterior, cabe la posibilidad de que se interprete que existe una antinomia entre lo dispuesto por el artículo 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y el artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, que residiría en que la primer disposición señala que existen sanciones que deberá imponer la Comisión de Honor y Justicia; mientras que

[36] "Artículo 221. Las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y los cambios de adscripción, serán aplicados en una sola audiencia por el inmediato superior jerárquico, sin que para ello se deban observar las formalidades establecidas en esta ley y las demás sanciones se impondrán por la Comisión de Honor y Justicia en los términos que prevé este ordenamiento.
"Cualquier controversia interna que se relacione con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios deberá ser atendida y resuelta por las unidades administrativas de asuntos internos."

[37] "Artículo 95. Para la aplicación de sanciones el secretario de Seguridad Pública, una vez que se tenga conocimiento de alguna infracción al presente reglamento, procederá a notificar al oficial que se estime responsable, la falta que se le imputa y le citará a una diligencia (sic) fecha y hora determinada, en la que se producirán con todos los datos y circunstancias relativos a la infracción de que se trate, y se le dará oportunidad al propio interesado para que en su derecho de audiencia produzca su defensa y alegue a su favor lo que estime conveniente. Concluida ésta diligencia, en la que deberán tomarse en cuenta los datos comprobatorios que puedan estimarse, se dictará la resolución que corresponda."

la segunda dispone en términos generales que para la aplicación de sanciones el secretario de Seguridad Pública notificará al oficial supuestamente responsable la falta imputada, le citará a una audiencia y dictará la resolución correspondiente, sin hacer mención de aquel organismo.

Para resolver esa aparente antinomia, debe tenerse presente que el referido artículo 221 ciertamente establece que la autoridad competente para imponer las sanciones administrativas aludidas es la **Comisión de Honor y Justicia**; sin embargo, debe tomarse en cuenta también que el propio Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, publicado en el periódico oficial del Estado el dos de diciembre de dos mil nueve, dispone en sus artículos 1, 4, 5, 13, 20, 26 y 27,[38] que dicha comisión es un órgano de carácter administrativo de apoyo al presidente municipal, con personalidad jurídica y dotado de autonomía para el conocimiento, trámite y resolución de las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en relación con la actuación de los elementos adscritos a la secretaría; que le corresponde la aplicación de las disposiciones previstas en la ley y el presente reglamento, para el caso de sanciones a los elementos de la secretaría que incurran en responsabilidad administrativa, y que tiene como **facultades**, entre otras, tramitar con apego a la ley, los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en contra de los elementos (fracción II) y llevar un registro de los elementos sancionados con motivo de la determinación de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la ley, el cual deberá ser enviado a la Contraloría Municipal y

---

[38] "(Periódico oficial del estado de N.L., de fecha 02 de diciembre del 2009)
"Artículo 1. Este reglamento es de orden público y de interés general, y tiene por objeto regular las atribuciones, estructura, organización y funcionamiento de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en relación con la aplicación en el Municipio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León."
"Artículo 4. La comisión es un órgano de carácter administrativo de apoyo al presidente municipal, con personalidad jurídica y dotado de autonomía para el conocimiento, trámite y resolución de las quejas y denuncias que presenten los Ciudadanos en relación con la actuación de los elementos adscritos a la secretaría.
"Los integrantes de la comisión durarán en su cargo el periodo constitucional de la administración municipal correspondiente. Los cargos de integrante de la comisión serán honoríficos."
"Artículo 5. Corresponde a la comisión la aplicación de las disposiciones previstas en la ley y el presente reglamento, para el caso de sanciones a los elementos de la secretaría que incurran en responsabilidad administrativa."
"Artículo 13. Son facultades de la comisión, las siguientes:
"I. Derogado.
"(Periódico Oficial del Estado de N.L., de fecha 07 de mayo del 2010)
"II. Tramitar con apego a la ley, los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de las quejas y denuncias que presenten los Ciudadanos en contra de los elementos.

a la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Nuevo León (fracción VI); y que el procedimiento administrativo de responsabilidad se sustanciará conforme a lo previsto en la ley y a las reglas de carácter general establecidas por el propio reglamento y que las sanciones que deriven de la procedencia administrativa de responsabilidad serán disciplinarias[39] o administrativas.[40]

Asimismo, la propia Ley de Seguridad Pública dispone textualmente, que cuando se trate de las sanciones de apercibimiento, amonestación, arresto y cambios de adscripción, serán aplicados en una sola audiencia por **el inmediato superior jerárquico**, sin que para ello deba observar las formalidades establecidas en la ley; lo que en conjunto con las disposiciones reglamentarias citadas en esta resolución lleva a estimar que corresponde al titular de

---

"III. Derogado.
" (Periódico Oficial del Estado de N.L., de fecha 07 de mayo del 2010)
"IV. Resolver los recursos de inconformidad que interpongan los Ciudadanos contra las determinaciones de la propia comisión.
"V. Resolver los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos en contra de las resoluciones de la comisión.
"VI. Llevar un registro de los elementos sancionados con motivo de la determinación de responsabilidad administrativa en los términos previstos en la ley, el cual deberá ser enviado a la Contraloría Municipal y a la Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Nuevo León.
"VII. Acceder sin limitación alguna para el eficaz desempeño de su función, a los expedientes laborales de los elementos de la secretaría.
"VIII. Informar cuando lo consideren pertinente al titular de la secretaría sobre los hechos denunciados y la forma en que consideren se deben de prevenir las actitudes anómalas de los elementos.
"IX. Emitir opinión para el otorgamiento de reconocimientos o condecoraciones públicos o privados, a los elementos de la secretaría, por la destacada labor y vocación de servicio que demuestren en el desempeño de su función.
"X. Informar al presidente municipal, a más tardar treinta días antes de su informe anual de gobierno, sobre las actividades y resultados obtenidos por los trabajos de la comisión."
"Capítulo cuarto
"Del procedimiento administrativo de responsabilidad"
"Artículo 20. El procedimiento administrativo de responsabilidad se sustanciará conforme a lo previsto en la ley, y a las reglas de carácter general establecidas por este reglamento."
"Artículo 26. Las sanciones que deriven de la procedencia administrativa de responsabilidad serán disciplinarias, administrativas y económicas.
"I. Son disciplinarias:
"a) El apercibimiento; y,
"b) La amonestación.
"II. Son administrativas:
"a) La suspensión temporal; y,
"b) La destitución.
"III. Se deroga."
"Artículo 27. En todo lo no previsto en este capítulo se atenderá a lo dispuesto en la ley."
[39] Apercibimiento y amonestación.
[40] Suspensión temporal y destitución.

la Secretaría de Seguridad Pública, aunado a que el referido artículo 221 establece expresamente que **las demás** sanciones se impondrán por la Comisión de Honor y Justicia acorde con su reglamentación y es enfático en el sentido de que las controversias internas que se relacionen con el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, serán atendidas por las unidades administrativas de asuntos internos.

Luego, si bien es cierto que el artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, Nuevo León, señala únicamente que para la aplicación de sanciones el secretario de Seguridad Pública notificará al oficial supuestamente responsable la falta imputada, le citará a una audiencia y dictará la resolución correspondiente, es evidente que el conjunto normativo ya examinado permite interpretar esa disposición en relación con la aplicación de sanciones de apercibimiento, amonestaciones, arresto, cambios de adscripción y suspensiones; y en cuanto a la imposición de sanciones por responsabilidades del orden administrativo que den lugar a la destitución o inhabilitación, como la comisión de faltas graves al cumplimiento de las obligaciones descritas en la Ley de Seguridad Pública para el Estado, la propia ley señala en su texto expreso, incluso como excepción al principio general del derecho administrativo a que se hizo alusión en el inicio de este punto considerativo, que corresponderá seguir tales procedimientos a un órgano diverso al superior jerárquico o al titular del ramo, que es precisamente la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento, sin que se advierta la existencia de una antinomia entre los artículos 221 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León y 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, porque finalmente ambas disposiciones prevén que cuando se trate de sanciones de apercibimiento, amonestaciones, arresto, cambios de adscripción y suspensiones, el secretario de Seguridad Pública del Municipio respectivo estará facultado para imponerlos, siguiendo para ello un procedimiento breve, sin necesidad de satisfacer mayores formalidades que notificar la falta que se le imputa y dar oportunidad de audiencia para resolver.

Máxime que de acuerdo con el artículo 18, fracción XXXIV, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública iniciar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en relación con los elementos de policía y tránsito, a través de su Coordinación de Asuntos Internos, y **en su caso turnar el expediente a la Comisión de Honor y Justicia para su análisis y resolución correspondiente**, por lo que no existe ninguna duda en cuanto a los órganos a quienes corresponde iniciar esos procedimientos, tramitarlos y resolverlos, acorde con la responsabilidad que del hecho investigado pudiera derivar.

Entonces, como corolario de todo lo expuesto, debe estimarse que de acuerdo con lo establecido en los artículos 198 Bis 30, 198 Bis 31, 221 y 223 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, y las disposiciones reglamentarias citadas, los agentes de policía podrán ser removidos o separados de sus puestos, cargos o comisiones a consecuencia de la terminación del nombramiento con que cuenten, cuando se acredite el incumplimiento de los requisitos de permanencia, caso en el cual, la autoridad legalmente competente para **iniciar** el procedimiento que se tramitará por conducto de la coordinación de asuntos internos y para **resolver** sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos de permanencia, **será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública**; y, por otra parte, tales elementos también podrán ser cesados, dados de baja, removidos o separados de sus puestos, cargos o comisiones con motivo de la aplicación del régimen disciplinario a que alude el título décimo, capítulo primero, sección segunda, de la propia ley de seguridad del Estado, correspondiente a la imposición de sanciones por la comisión de alguna falta grave a los principios de actuación previstos en la ley y disposiciones reglamentarias específicas, casos en los que la autoridad competente para imponer las sanciones será la **Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento**, en los términos de la ley que se comenta.

En ese contexto, los criterios jurídicos que deben prevalecer, con el carácter de jurisprudencia son los que sustenta este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito conforme a los razonamientos anteriores, en las tesis propuestas en los siguientes términos:

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN. De los artículos 198 Bis 30 y 198 Bis 31 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, 18, fracciones XIV, XXXIV y XXXV, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, y 2, 9, 92, 93 y 94 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, se deduce que corresponde al secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en su carácter de titular de la dependencia relativa y superior jerárquico de los elementos adscritos a dicha secretaría, iniciar por conducto de la Coordinación de Asuntos Internos, el procedimiento de separación o cese en el cargo, empleo o comisión por el incumplimiento de los requisitos de permanencia en la institución, así como resolver si éstos se encuentran o no satisfechos y aplicar las sanciones correspondientes. Lo anterior es así, toda vez que en la lógica de la naturaleza de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos a

quien incumbe corregir las actuaciones cometidas es, por regla general, al superior jerárquico del infractor.

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN. De los artículos 221 y 223 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, 18, fracciones XIV, XXXIV y XXXV, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, y 4, 5, 13, 20, 26 y 27 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, deriva la aplicación del régimen disciplinario para los casos en que el elemento policiaco incurra en alguna de las conductas prohibidas en el artículo 158 de dicha ley, y que cuando se trate de la imposición de sanciones a los elementos adscritos a los cuerpos de seguridad pública del Municipio referido, por responsabilidades del orden administrativo que den lugar a la destitución o inhabilitación, como la comisión de faltas graves al cumplimiento de las obligaciones descritas en la referida ley indicada, corresponderá seguir tales procedimientos a la Comisión de Honor y Justicia aludida, conforme al procedimiento establecido en el artículo 229 de la propia ley. Lo anterior es así, porque aun cuando el artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, señala únicamente que para la aplicación de sanciones el citado secretario notificará al oficial supuestamente responsable la falta imputada, le citará a una audiencia y dictará la resolución correspondiente, es evidente que el conjunto normativo examinado permite interpretar esa disposición en relación con la aplicación de sanciones de apercibimiento, amonestaciones, arresto, cambios de adscripción y suspensiones; y en cuanto a la imposición de sanciones por responsabilidades del orden administrativo que den lugar a la destitución o inhabilitación, como la comisión de faltas graves al cumplimiento de las obligaciones aludidas, la propia ley señala en su texto expreso, que corresponde seguir tales procedimientos a un órgano diverso al superior jerárquico o titular del ramo, que es precisamente la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Primero y Tercero en Materia Administrativa ambos

del Cuarto Circuito, al resolver los amparos en revisión 658/2011 y 168/2014, respectivamente.

SEGUNDO.—Deben prevalecer, con carácter jurisprudencial, los criterios sustentados por este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo las tesis redactadas en la parte final del último considerando de esta resolución.

TERCERO.—En atención a la solicitud formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el proveído de ocho de septiembre de dos mil catorce, remítasele únicamente por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de la copia certificada de esta resolución, así como su versión electrónica a la cuenta de correo electrónico *sentenciaspcscjnssga@mail.scjn.gob.mx*.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes. Envíense en su momento las jurisprudencias que se sustentan al Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; remítanse de inmediato la indicada jurisprudencia y la parte considerativa de este fallo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta* y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de tres votos, lo resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, integrado por su presidente Magistrado **José Carlos Rodríguez Navarro**, así como los Magistrados **Antonio Ceja Ochoa** y **Miguel Ángel Cantú Cisneros**, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman conjuntamente con el secretario de Acuerdos **Miguel Ángel Luna Gracia**, quien da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN. De los artículos 221 y 223 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, 18, fracciones XIV, XXXIV y XXXV, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, y 4, 5, 13, 20, 26 y 27 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, deriva la aplicación del régimen disciplinario para los casos en que el elemento policiaco incurra en alguna de las conductas prohibidas en el artículo 158 de dicha ley, y que cuando se trate de la imposición de sanciones a los elementos adscritos a los cuerpos de seguridad pública del Municipio referido, por responsabilidades del orden administrativo que den lugar a la destitución o inhabilitación, como la comisión de faltas graves al cumplimiento de las obligaciones descritas en la referida ley indicada, corresponderá seguir tales procedimientos a la Comisión de Honor y Justicia aludida, conforme al procedimiento establecido en el artículo 229 de la propia ley. Lo anterior es así, porque aun cuando el artículo 95 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, señala únicamente que para la aplicación de sanciones el citado secretario notificará al oficial supuestamente responsable la falta imputada, le citará a una audiencia y dictará la resolución correspondiente, es evidente que el conjunto normativo examinado permite interpretar esa disposición en relación con la aplicación de sanciones de apercibimiento, amonestaciones, arresto, cambios de adscripción y suspensiones; y en cuanto a la imposición de sanciones por responsabilidades del orden administrativo que den lugar a la destitución o inhabilitación, como la comisión de faltas graves al cumplimiento de las obligaciones aludidas, la propia ley señala en su texto expreso, que corresponde seguir tales procedimientos a un órgano diverso al superior jerárquico o titular del ramo, que es precisamente la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
PC.IV.A. J/12 A (10a.).

Contradicción de tesis 13/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17 de febrero de 2015. Unanimidad de tres votos de los Magistrados José Carlos Rodríguez Navarro, Antonio Ceja Ochoa y Miguel Ángel Cantú Cisneros. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 658/2011, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 168/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN. De los artículos 198 Bis 30 y 198 Bis 31 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, 18, fracciones XIV, XXXIV y XXXV, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, y 2, 9, 92, 93 y 94 del Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, se deduce que corresponde al secretario de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, en su carácter de titular de la dependencia relativa y superior jerárquico de los elementos adscritos a dicha Secretaría, iniciar por conducto de la Coordinación de Asuntos Internos, el procedimiento de separación o cese en el cargo, empleo o comisión por el incumplimiento de los requisitos de permanencia en la institución, así como resolver si éstos se encuentran o no satisfechos y aplicar las sanciones correspondientes. Lo anterior es así, toda vez que en la lógica de la naturaleza de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos a quien incumbe corregir las actuaciones cometidas es, por regla general, al superior jerárquico del infractor.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
PC.IV.A. J/11 A (10a.)

Contradicción de tesis 13/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17 de febrero de 2015. Unanimidad de tres votos de los Magistrados José Carlos Rodríguez Navarro, Antonio Ceja Ochoa y Miguel Ángel Cantú Cisneros. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 658/2011, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 168/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN, SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO Y ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO. DISIDENTES: LUCILA CASTELÁN RUEDA Y ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. PONENTE: SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. SECRETARIA: LISBET CATALINA SOTO MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

III. Análisis de presupuestos procesales

7. **Competencia.** Este Pleno del Trigésimo Circuito es **competente** para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una contradicción sustentada entre criterios de los Tribunales Colegiados de este circuito.

8. **Legitimación de los denunciantes.** La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de **parte legítima**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por la Magistrada Lucila Castelán Rueda, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis.

IV. Criterios contendientes

9. Es pertinente destacar los antecedentes torales de los actos reclamados en los amparos directos civiles, así como las consideraciones expuestas en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que la Magistrada denunciante estima contradictorios.

10. El **Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito**, al resolver el amparo directo civil ********** analizó un asunto del que se advierten las particularidades siguientes:

• Que una persona compareció a demandar a otra en ejercicio de la acción reivindicatoria, para que, por sentencia firme, se declare que aquél es el legítimo propietario de una casa.

• Que una vez seguido el procedimiento por sus trámites legales, el siete de diciembre de dos mil diez se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró que el actor probó parcialmente su acción y la demandada no probó sus excepciones y defensas, condenándosele a esta última, a restituir a favor de aquél el bien inmueble objeto de la controversia, y al pago de gastos y costas.

• Que contra dicho fallo, el actor interpuso recurso de apelación, mismo que se registró bajo el toca civil **********, y le correspondió conocer a la entonces Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien emitió sentencia el veinticuatro de febrero de dos mil once, en la que modificó la de primera instancia para absolver a la demandada del pago de gastos y costas.

11. Inconforme con lo anterior, el demandado promovió **juicio de amparo directo**, el cual fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, quien lo registró con el número de expediente ADC. ********** y lo resolvió –por mayoría de votos–[3] el seis de mayo de dos mil once, al tenor de las consideraciones siguientes:

• Que resultó fundado el argumento del peticionario del amparo, en el que, en esencia, adujo que la resolución combatida es violatoria de los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque la Sala responsable los interpretó de forma errónea y no hace condena especial de costas en el juicio.

• Que la cuestión a dilucidar radicó en determinar si, como lo sostuvo la autoridad responsable, la ley impone a los particulares que acudan ante el

[3] **Nota:** Los Magistrados Álvaro Ovalle Álvarez y Esteban Álvarez Troncoso votaron a favor, en tanto que la Magistrada Lucila Castelán Rueda (ponente) emitió voto particular, al considerar que se resolvió supliéndose la deficiencia de la queja, porque en los conceptos de violación no advirtió causa clara de pedir que justificara la concesión del amparo solicitado.

órgano jurisdiccional, a fin de que se declare que le corresponde al propietario de la cosa que no tiene en posesión su dominio, además de que no existe disposición en la ley que reconozca la procedencia de la reivindicación de pleno derecho, o si, por el contrario, como lo adujo el quejoso, la acción reivindicatoria no necesaria y obligatoriamente se debe instaurar, ya que el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado sólo da los supuestos de procedencia de esa acción, además de que fue la conducta de la demandada la que lo obligó a instaurar el juicio, por lo que sí le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia.

• Que se decidió a favor de los argumentos expuestos por el quejoso, esto es, con base en la tesis de que en la ley no hay disposición expresa que mande que la controversia suscitada en el juicio natural deba decidirse necesariamente por los órganos jurisdiccionales y, por consiguiente, que no existe prohibición alguna para que las partes válidamente pudieran avenirse en torno al negocio jurídico subyacente a la pretensión de reivindicación del predio al propietario que no gozaba de la posesión y evitar así la contienda judicial ya iniciada.

• Que es así, porque la literalidad del artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado pone en relieve que no ordena, como lo exige el artículo 129, fracción I, del mismo código, que la acción reivindicatoria deba ser decidida, necesariamente, por la autoridad judicial, pues de los términos en que se encuentra redactada esa disposición legal se advierte que únicamente establece que a quien compete la acción reivindicatoria es al propietario de la cosa que no la tiene en posesión para que, en caso de que se dicte sentencia, el Juez determine que le corresponde el dominio de ella, además, que el poseedor deberá entregarla con sus frutos y accesiones, pero ello no implica, de ninguna manera, que el juzgador necesariamente deba resolver dicha acción.

• Que el vocablo "orden" a que se refiere la fracción I del artículo 129 del código procesal civil, en su acepción jurídica, significa, desde el punto de vista más general, toda prescripción imperativa, verbal o escrita, de ejecutar u omitir una determinada acción cualquiera que sea su naturaleza; en tanto que, en similar sentido, Eduardo J. Couture, en su obra titulada "*Vocabulario jurídico*", define la locución "*orden*", en los términos siguientes: "*Orden. I. Definición. 1. Serie o sucesión de las cosas en el lugar que les corresponde. 2. Mandato que se debe obedecer, acatar y ejecutar. 3. Elipsis de 'orden público' (Véase esta locución). 4. Paz social, pública tranquilidad*."

• Que si se toma en cuenta que de acuerdo con el artículo 129, fracción I, del código adjetivo civil vigente en el Estado se requiere que la ley ordene, es decir, que prescriba de manera imperativa o prevea un mandato, en el sentido de que las controversias sobre la reivindicación de un predio deban decidirse por la autoridad judicial, no hay tal prescripción o mandato en el precepto legal 4o. de la legislación adjetiva civil aludido, pues éste no dispone que el Juez deba necesariamente resolver ese tipo de acción, ya que sólo establece a quién compete el ejercicio de ella y la forma en que debe restituirse la posesión de la cosa a quien tiene su dominio, mas no que necesariamente deba ser él quien la decida.

• Que luego, como el citado precepto 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado contiene excepciones a la regla general de condenación en costas, prevista en el numeral 129 de la misma codificación, su interpretación debe hacerse conforme al principio general de derecho que dice: *exceptio est strictissimae interpretationis*, es decir, que sus disposiciones deben interpretarse en sentido estricto.

• Que, además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8o. del Código Civil del Estado, las normas que establecen excepciones a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes; de ahí que, para que tenga aplicación la excepción de no imputabilidad de la falta de composición voluntaria de la controversia contenida en la fracción I del artículo 129 del código adjetivo civil en vigor, es indispensable que en la legislación correspondiente esté expresamente prevista la orden de que determinada controversia debe ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, lo que, según se ha visto, no sucede respecto del pleito derivado del juicio de origen.

• Que, por tanto, si el legislador no ordenó en el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que las controversias sobre la reivindicación de la posesión de una cosa necesariamente debían decidirse por la autoridad judicial, lo que no excluye que las resuelvan, las disposiciones contenidas en él no pueden dar sustento a los motivos que la Sala responsable expuso para concluir que, en la especie, la ley ordena que ese tipo de asuntos deba decidirse por los órganos jurisdiccionales y utilizar este argumento para absolver a la parte demandada del pago de costas.

• Que, además, el apartado de costas del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, está inspirado en las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles promulgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos

cuarenta y tres, y de la exposición de motivos de este último ordenamiento, concretamente del apartado de obligaciones y responsabilidades de las partes, se advierte que el legislador indicó que no había razón alguna para fincar la responsabilidad de la falta de composición de la controversia y, en consecuencia, de los gastos ocasionados, entre otros casos, en los que la ley no permite la composición privada, ejemplificando los relativos al divorcio voluntario, los de rectificación de las actas del Registro Civil y otros análogos.

• Que sin embargo, respecto de los dos primeros ejemplos antes citados la ley sí es categórica, es decir, sí contiene orden expresa en cuanto a que ese tipo de asuntos deben ser resueltos por la autoridad judicial, lo que, desde luego, implica una prohibición para que pueda existir la composición privada de ellos.

• Que entonces, es evidente que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, ni en el artículo 4o., ni en ningún otro ordena que las controversias sobre reivindicación necesariamente deban ser decididas por la autoridad judicial, por lo que es claro que, en la especie, no se actualiza lo dispuesto por el artículo 129, fracción I, del código procesal civil, para que la parte demandada, perdedora en el juicio, pueda resultar absuelta del pago de costas.

12. Por otra parte, el **Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito**, al resolver el amparo directo civil **********, analizó un asunto, del que se advierten las particularidades siguientes:

• Que una persona ejercitó acción reivindicatoria en contra de otra, respecto de un bien inmueble.

• Que de dicho juicio tocó conocer al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, donde se radicó bajo el número **********.

• Que una vez seguido el procedimiento por sus trámites legales y en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo **********, se dictó sentencia en la que se ordenó reponer el procedimiento, a fin de llamar a juicio a una persona diversa de los contendientes, en los términos del auto admisorio de la reconvención, dejándose insubsistentes aquellas actuaciones que guardaban relación con su llamamiento a juicio.

• Que tramitado que fue el procedimiento, el veintidós de octubre de dos mil doce, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró que el actor principal probó su acción y el demandado no probó sus excepciones, ni su demanda reconvencional, por lo que se condenó a este último, a entregar

el inmueble reclamado, absolviéndosele de las prestaciones C), D) y E); en tanto que al actor principal, así como a la tercera llamada a juicio, se les absolvió de lo reclamado en la reconvención, sin hacer especial condena en costas.

• Que contra dicho fallo, ambas partes interpusieron recurso de apelación, el cual tocó conocer a la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien por sentencia de cinco de marzo de dos mil catorce y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo civil **********, revocó la de primera instancia, determinando que el actor no acreditó su acción reivindicatoria, en tanto que el demandado demostró su excepción de cosa juzgada refleja, por lo que lo absolvió de las prestaciones reclamadas. A su vez, determinó que el actor en la reconvención demostró la acción de nulidad de la escritura pública **********, volumen ********** del notario público número dieciocho de los del Estado y ordenó las anotaciones correspondientes y absolvió a ********** del pago de gastos y costas.

• Que inconforme con lo anterior, el actor reconvencionista promovió **juicio de amparo directo**, el cual fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, quien lo registró con el número de expediente ADC. ********** y lo resolvió –por mayoría de votos–[4] el seis de mayo de dos mil once, bajo las mismas consideraciones esenciales que se destacaron en párrafos que anteceden respecto del ADC. **********.

13. Por otra parte, **el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito**, al resolver el **juicio de amparo directo civil** ********** analizó un asunto, del que se advierten las particularidades siguientes:

• Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil nueve, en la oficialía de partes del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, una persona demandó en la vía única civil a otra en ejercicio de la acción reivindicatoria, para que mediante sentencia firme se determinara lo siguiente: se declarara a su favor el dominio pleno de una unidad condominal; se condenara

[4] **Nota:** El Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez (ponente) y la Magistrada Lucila Castelán Rueda votaron a favor, en tanto que el Magistrado Esteban Álvarez Troncoso emitió voto particular, al considerar, en esencia, que tratándose de la acción reivindicatoria se actualiza la hipótesis de excepción de pago de costas, contenida en la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado (a la parte perdedora no le es imputable la falta de composición voluntaria), porque es necesario el pronunciamiento de un Juez respecto a quién debe tener el dominio de la cosa y, en su caso, condenar al poseedor para que la entregue con sus frutos y accesiones.

a la demandada a restituir al actor el inmueble señalado, junto con sus accesorios y frutos naturales, civiles e industriales, así como al pago de gastos y costas que se generen con motivo de dicho juicio.

• Dicho asunto fue turnado al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, en donde se radicó con el número de expediente ********** y, previos los trámites legales, se dictó la sentencia correspondiente el tres de diciembre de dos mil nueve, en la que se declaró que el actor no acreditó su acción y que la demandada demostró parcialmente sus excepciones, por lo que se le absolvió de las prestaciones reclamadas y se condenó al actor al pago de costas a favor de la demandada.

• En contra de tal decisión, el actor promovió juicio de amparo directo, el cual se turnó al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en donde se radicó con el número de expediente ADC. ********** y fue resuelto el treinta de septiembre de dos mil diez, al tenor de las consideraciones medulares que se resumen a continuación:

i. Que es fundado el concepto de violación en el que el quejoso adujo que como el artículo 4o. del código procesal civil dispone que, al intentar la acción reivindicatoria, se persigue que el juzgador haga una declaración en el sentido de que la parte actora es propietaria del bien sobre el que se hace valer la acción, entonces, se trata de un asunto que sólo puede resolverse por el Juez, y que, por ende, en términos de la fracción I del artículo 129 del código procesal civil para el Estado, se entiende que no es imputable a la parte perdedora la falta de composición voluntaria de la controversia, por lo que debió absolverse del pago de gastos y costas.

ii. Que es así, porque de la fracción I del artículo 129 del código adjetivo civil del Estado, se advierte que la excepción para no condenar a la parte que pierde al pago de las costas del juicio, consiste en que la ley ordene que la controversia necesariamente tiene que ser decidida por autoridad judicial; de manera que para establecer si se actualiza el aludido supuesto de excepción a la condena al pago de costas, la autoridad jurisdiccional sólo deberá verificar si existe disposición legal que ordene que la controversia sometida a su conocimiento necesariamente deba ser resuelta por una autoridad judicial.

iii. Que en el juicio de origen se ejercitó la acción reivindicatoria, la cual está prevista en el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece que dicha acción compete al propietario de la cosa que no la tiene en posesión, para que "*se declare*" que le corresponde el dominio

de ella y el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones; declaración, que como lo afirma la quejosa, necesariamente, debe emitir un Juez.

iv. Que en este contexto, contrariamente a lo considerado por la Sala responsable, de lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en relación con el numeral 4o. del mismo ordenamiento, se advierte que, al señalar este último precepto que deberá declararse que le corresponde el dominio de la cosa al propietario que no la tiene en posesión, sólo puede interpretarse como una orden establecida en la ley para que el particular acuda ante un tribunal jurisdiccional para que dicha autoridad decida respecto de la procedencia de esa acción.

V. Existencia de la contradicción de tesis

14. Corresponde ahora analizar si concurre la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer con carácter de jurisprudencia.

15. Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

I. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

II. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

16. Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

17. En ese sentido, se pronunció el Pleno del Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, del mes de agosto de 2010, página 7, de contenido siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS

DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.',[5] al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo

[5] Visible en el Tomo XIII, abril de 2001, página 76, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*.

anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

18. Sobre tales premisas, cabe señalar que el análisis de las ejecutorias referidas, en lo conducente, pone de manifiesto que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se enfrentaron a una problemática esencialmente igual, consistente en determinar si en el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado se establece una orden en el sentido de que la acción reivindicatoria deba ser decidida necesariamente por una autoridad judicial, a fin de que se actualice la excepción de condena al pago de costas a la parte que se considera perdedora, prevista por el artículo 129 del citado código, consistente en que no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia.

19. Ahora, en relación con esa disyuntiva, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito sostuvo, en esencia, que la literalidad del artículo 4o. del código citado, no ordena que la acción reivindicatoria deba ser decidida necesariamente por autoridad judicial, pues de su texto no se advierte mandato alguno en ese sentido, sino que sólo establece a quién compete el ejercicio de ella y la forma en que debe restituirse la posesión de la cosa a quien tiene su dominio, mas no que el juzgador deba ser quien la decida, por lo que, en ese contexto, no se actualiza la excepción de pago de gastos y costas prevista en el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, consistente en que a la parte perdidosa no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, porque la ley ordene que ésta sea decidida necesariamente por autoridad judicial.

20. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito sustentó, en relación con la problemática en cuestión, que al señalar el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que deberá declararse que le corresponde el dominio de la cosa al propietario que no la tiene en posesión, ello sólo puede interpretarse como una orden establecida en la ley para que el particular acuda ante un tribunal jurisdiccional para que éste decida respecto de la procedencia de la acción reivindicatoria y, por ende, ello actualiza la excepción de pago de gastos y costas contenida en la fracción I del artículo 129 del citado código.

21. En esa tesitura, queda evidenciado que los Tribunales Colegiados de Circuito implicados examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual y llegaron a conclusiones encontradas.

22. Es así, en tanto que mientras uno estimó que el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles no establece la orden de que la acción reivindicatoria necesariamente tenga que ser decidida por autoridad judicial para efectos de actualizar la excepción de pago de costas, prevista en la fracción I del artículo 129 de dicha codificación, consistente en que a la parte vencedora no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia; el otro sostuvo que sí configura esta última hipótesis, porque lo previsto en el primer dispositivo legal citado sólo puede interpretarse como un mandato para que el particular acuda ante un tribunal para que éste decida la procedencia de dicha acción.

23. Luego, existe la contradicción de criterios denunciada, cuya materia consiste en determinar si en el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado se establece una orden en el sentido de que la acción reivindicatoria deba ser decidida necesariamente por una autoridad judicial, a fin de que se actualice la excepción de condena al pago de costas a la parte que se considera perdedora, prevista por el artículo 129 del citado código, consistente en que no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia.

VI. Estudio de la contradicción

24. Este Tribunal Pleno de Circuito considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resolución, de conformidad con los razonamientos y fundamentos que se expondrán a continuación:

25. Conforme al segundo párrafo del artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes,[6] las costas del proceso con-

[6] "**Artículo 128.** La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge, total o parcialmente las pretensiones de la parte contraria.
"Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa considerados superfluos.
"Todo gasto inútil es a cargo de la parte que lo haya ocasionado, sea que gane o pierda el juicio."

sisten en la suma que, según la apreciación del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa considerados inútiles.

26. Asimismo, en el citado precepto se prevé la regla general para establecer la condena al pago de costas, pues señala que a la parte que pierde le corresponde reembolsar a su contraria las costas del proceso, y que se considera perdidosa una parte, cuando el tribunal acoge, total o parcialmente, las pretensiones de la contraria.

27. Por otra parte, en el diverso artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes se indica en qué caso debe exonerarse a la parte perdedora en el juicio del pago de costas, pues establece:

"**Artículo 129.** No será condenada en costas la parte que pierde, si no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, y, además, limitó su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para ser (sic) posible la definitiva resolución del negocio.

"Se entiende que no es imputable a la parte la falta de composición voluntaria de la controversia:

"**I.** Cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por autoridad judicial;

"**II.** Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en substituir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes; y

"**III.** Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad."

28. Conforme al precepto legal transcrito, para que la parte perdedora en el juicio pueda ser absuelta del pago de costas, es necesario que concurran los supuestos siguientes:

I. Que no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia; y,

II. Que haya limitado su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio.

29. En relación con el primer requisito, el artículo en estudio enumera, a su vez, los casos en los que se entiende que a la parte perdedora no le es imputable la falta de composición de la controversia, a saber:

a) Cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por la autoridad judicial;

b) Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en sustituir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes; y,

c) Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad.

30. En el caso, interesa la hipótesis contenida en el inciso a) que precede, pues fue la que se tomó en cuenta por los Tribunales Colegiados contendientes para resolver la cuestión aducida ante ellos.

31. Luego, a fin de tener una mejor convicción sobre el tema de contradicción, conviene aludir a las razones que dieron lugar a la conformación del sistema de costas que rige actualmente en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, advirtiéndose que en la exposición de motivos de dicha codificación se indicó:

"*El capítulo séptimo que trata de las costas, abandona el sistema del actual código y se establece un sistema inspirado en el Código Federal de Procedimientos Civiles que se considera más claro y actualizado*."

32. Como se ve, el código procesal civil de la Entidad está inspirado en el Código Federal de Procedimientos Civiles, promulgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, siendo que, en la exposición de motivos de dicha codificación, en lo que aquí interesa, se dijo:

"Capítulo II
"Obligaciones y responsabilidades de las partes

"La extralimitación en el ejercicio de los derechos, aparte de fincar la responsabilidad directa en contra del violador del orden jurídico; consistente en el restablecimiento de la situación protegida, provoca una responsabilidad indirecta, de responder patrimonialmente de los gastos necesarios para obtener la composición coactiva de la controversia. Los límites de esta última responsabilidad son los mismos que los de la directa, de manera que ésta debe tomarse como índice para determinar los extremos de aquélla.

"Cuando una parte triunfa totalmente, la más elemental justicia impone que todos los gastos que haya hecho, para obtener la protección de su derecho violado, los reporte su contraparte; pero, si el triunfo no fue total, esa misma justicia indica que cada parte tenga sólo responsabilidad en la proporción en que haya perdido y, consiguientemente, la definitiva indemnización por gastos ha de establecerse compensando el importe de ambas responsabilidades, para que sea exigible sólo el residuo, por quien tenga derecho a él, de acuerdo con las proporciones recíprocas de las pérdidas. **Este principio tiene dos correcciones:** estriba la primera en que los gastos han de ser los indispensables para la composición del conflicto, por lo que, todo gasto inútil, careciendo de justificación, debe ser a cargo de quien lo motivó, sea que gane o pierda el pleito; **la segunda se fundamenta en el principio de que sólo es lícito componer coactivamente una disputa cuando no ha sido posible hacerlo privadamente, siendo aquí de distinguir tres casos**:

"**a) La ley no permite la composición privada, como en los casos de divorcio voluntario, de rectificación de actas del estado civil u otros análogos.**

"b) Estriba la cuestión en un mero caso de derecho dudoso o en sustituir el arbitrio judicial a la voluntad de las partes.

"c) La demandada fue llamada a juicio sin necesidad.

"**En el caso a) no hay posibilidad legal de que las partes obtengan el efecto jurídico que buscan mediante el juicio, sin ocurrir a los tribunales.** No hay aquí razón alguna que finque la responsabilidad de la falta de composición y, en consecuencia, de los gastos necesarios que ocasione, en contra de ninguno de los litigantes, por lo cual, lo debido es que cada uno responda de sus propios gastos.

"En el caso b), no estando determinado incontrovertiblemente el derecho, precisamente por ser dudoso o por tratarse de una cuestión de mero arbitrio, como en el caso precedente debe concluirse que no fue posible llegar a una composición voluntaria, por no haber razón que impusiera a uno de los contendientes someterse a la estimación de su contrario.

"El caso c), exige un estudio un poco más detenido: en efecto, es indispensable precisar el concepto de falta de necesidad del juicio. No puede decirse que el demandado haya dado lugar a ocurrir al tribunal cuando no tocaba a él tomar la iniciativa para obtener la composición; por esto, en todo caso en que fuera necesario un acto cualquiera del actor, así se tratase de la

mera interpelación, la omisión del actor libra al demandado de los gastos de la composición, pues, si ésta no se logró privadamente, fue a causa del actor; pero siempre que el demandado se allane, sin subterfugio, a cumplir el derecho.

"No obstante, si el actor no realizó el acto que le correspondía, por renuencia u ocultación del demandado, éste es responsable de los gastos, puesto que su actitud fue la causa de ser llamado a juicio.

"Son éstas las razones que fundamentan los artículos 7o., 8o. y 10 del proyecto."

33. Lo transcrito pone en evidencia que la razón o motivo que da lugar a determinar que a la parte perdedora no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, porque la ley ordena que ésta sea decidida necesariamente por una autoridad judicial y que, por ende, no procede condena de costas en su contra, radica en que la propia ley no permite la composición privada, esto es, que en términos de la norma no hay posibilidad de que las partes obtengan el efecto jurídico que buscan mediante el juicio, sin acudir ante los tribunales.

34. Ahora bien, respecto de la hipótesis de excepción de pago de costas que aquí nos ocupa, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/2010, que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 68/2010, de rubro: "COSTAS. CUANDO SE HACE VALER LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CONTRATOS SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.",[7] sostuvo, en esencia:

A) Que en el precepto legal 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado se establece que la parte perdedora en el juicio no será condenada al pago de costas cuando no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia y esto sucede, entre otros casos, cuando la ley ordena que ésta sea decidida necesariamente por la autoridad judicial, conforme a lo cual, se requiere que la ley prescriba de manera imperativa un mandato en el sentido de que toda controversia deba ser decidida por una autoridad judicial.

---

[7] Visible en el Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 6, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época.

B) Que de la exposición de motivos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, promulgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, se advierte que el legislador estableció una excepción para la condena en costas a la parte perdedora, la cual **se fundamentó en el principio de que sólo es lícito componer coactivamente una disputa cuando no ha sido posible hacerlo privadamente**, y distinguió tres casos, el primero, que es el que aquí interesa, cuando la ley no permite composición privada, señalando, a manera de ejemplo, los relativos a los casos de divorcio voluntario y de ratificación de actas del estado civil, u otros análogos.

C) Que conforme a lo previsto en los artículos 2097 y 2098 de la citada codificación, la acción de nulidad de contratos puede considerarse como uno de los casos análogos a que se refiere la exposición de motivos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, citada en párrafos precedentes, pues al igual que los ejemplos mencionados en ella, **la acción de nulidad requiere de declaración expresa de la autoridad judicial, pues no es jurídicamente posible ni válido que la nulidad de un acto sea convenida entre particulares**.

D) Que de una interpretación literal de los numerales aludidos en el inciso que antecede, se advierte que la nulidad del acto jurídico debe ser pronunciada por una autoridad judicial, lo que conlleva a que la nulidad, ya sea absoluta o relativa, no impide que los efectos producidos provisionalmente sean destruidos de forma retroactiva cuando se pronuncie por el Juez.

E) Que lo anterior pone de manifiesto que el artículo 2097 del multicitado código sustantivo **impone a los particulares la obligación de acudir ante un órgano jurisdiccional con el objeto de que éste se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de dicha nulidad, pues de lo contrario, se estaría en el supuesto de que la declaratoria de nulidad la podrían llevar a cabo los propios contendientes o autoridad diversa a la judicial**, lo cual contravendría la garantía de seguridad jurídica que contempla el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

F) Que en consecuencia, no le es imputable a la parte perdedora la falta de composición voluntaria de la controversia, pues la **ley ordena que la acción de nulidad necesariamente debe ser decidida por autoridad judicial**.

G) Que por tanto, tratándose de controversias sobre acciones de nulidad, indiscutiblemente, deben decidirse por una autoridad judicial, toda vez

que el texto que regula lo atinente a la nulidad contiene un mandato en ese sentido, al establecer de forma taxativa que: "*cuando se pronuncie por el Juez la nulidad*". Que esto deja claro que es la autoridad judicial quien debe pronunciarse sobre la cuestiones de nulidad.

35. Las consideraciones anteriores revelan que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, para concluir que la acción de nulidad de contratos necesariamente debe decidirse por una autoridad judicial, y que cuando se hace valer dicha acción se actualiza la excepción de condena de costas, prevista en el artículo 129 del código procesal de este Estado, tomó en consideración dos aspectos fundamentales: el primero, si las partes podrían convenir de manera privada y obtener los mismos efectos jurídicos que se busca con la tramitación del juicio y, el segundo, la redacción del texto de la norma que establece la acción que se ejercitó (nulidad de contratos).

36. Ahora bien, conforme a las razones de la ejecutoria que fue destacada y a lo establecido por el legislador en la exposición de motivos que fue transcrita en párrafos que anteceden, se arriba a la conclusión de que no se puede decidir, de manera general, cuándo se está ante la hipótesis de excepción de pago de costas, consistente en que a las partes no les sea imputable la falta de composición voluntaria, sino que, para poder determinar dicha cuestión, es necesario efectuar un análisis del caso concreto, esto es, de las particularidades de la acción que se entabla y los efectos jurídicos que genera su procedencia, a fin de verificar si constituye un caso análogo a los que previó expresamente el legislador como supuestos de excepción de la citada condena, tales como la acción de divorcio voluntario o de rectificación de las actas del estado civil, o bien, al que sostuvo nuestro Máximo Tribunal del País mediante jurisprudencia, esto es, la nulidad de contratos.

37. En el caso, la acción reivindicatoria se encuentra prevista en el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone:

"**Artículo 4.** La reivindicación compete al propietario de la cosa que no la tiene en su posesión, **para que se declare que le corresponde el dominio de ella y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones** en los términos prescritos por el Código Civil."

38. Como se advierte, la finalidad de la acción reivindicatoria consiste en que el juzgador analice y decida si a quien se ostenta como propietario de una cosa, que no tiene en posesión, le corresponde el dominio de ella, y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones; luego, es claro que el efecto jurídico que se pretende obtener con el ejercicio de dicha acción

es que se haga una declaratoria de la calidad de propietario que ejerce una persona respecto de una cosa, a fin de que pueda tenerla en posesión en los términos legales.

39. Al respecto, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 35/98, analizó la naturaleza jurídica de la acción reivindicatoria a la luz del artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, y del precepto 4 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, determinando lo siguiente:

"Ahora bien, el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, determina con relación a la acción reivindicatoria lo siguiente:

"'Artículo 4. La acción reivindicatoria compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil.'

"A su vez, el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, aun y cuando no define puntualmente lo que debe entenderse por la acción reivindicatoria, establece textualmente con relación a las acciones reales que:

"'Artículo 3. La acción real puede ejercitarse contra cualquier poseedor.'

"Desde el punto de vista histórico, la acción reivindicatoria o '*actio rei vindicatio*', fue concebida originalmente en las doce tablas del derecho romano. En principio, el proceso de propiedad se desenvolvía mediante la fórmula de la '*legis actio sacramento in rem*'. En ella, las partes involucradas afirmaban el mismo derecho, es decir, el de propiedad, realizando una apuesta sacramental que traía como consecuencia para el vencido en juicio la pérdida a título de pena, del dinero de dicha apuesta.

"Posteriormente, en la época clásica del derecho romano la acción reivindicatoria podía ser ejercitada mediante la fórmula '*per formulam petitoriam*', en ésta no se trata ya de un juicio entre pretensores de la propiedad, sino entre dos partes que ocupan una posición distinta, la de actor el propietario, y la del demandado, el poseedor, cuyo objeto principal consistía en restituir al propietario, si demostraba su pretensión, el bien en disputa más los frutos que entre tanto hubiere adquirido su poseedor.

"En términos generales, esta última fórmula fue acogida por los distintos países que adoptaron el sistema jurídico romanista, conteniendo actualmente en nuestra legislación los mismos elementos, requisitos y finalidades que desde entonces reunía dicha institución.

"Doctrinalmente, existe unidad de criterios entre los diversos autores mexicanos al señalar que la acción reivindicatoria es la acción real que tiene el propietario de un bien mueble o inmueble, que se dirige contra el poseedor del mismo, para recuperarlo y obtener se le entreguen los frutos y accesiones de la cosa.

"En efecto, la reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar judicialmente que el actor tiene dominio sobre ella y que el demandado se la entregue con sus frutos y accesiones en los términos previstos por el Código Civil aplicable. En otras palabras, la reivindicación es la acción derivada de los hechos ilícitos que impidieren absolutamente los derechos reales que puedan ejercerse por medio de la posesión, a efecto de que ésta se restituya."

40. Consideraciones las anteriores, que resultan aplicables e ilustrativas al caso, pues la redacción del artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí,[8] que fue objeto de interpretación por parte del Máximo Tribunal del País, es casi idéntica a la del numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad de Aguascalientes.

41. Así, se considera que cuando se ejercita la acción reivindicatoria se está ante una hipótesis análoga a las consideradas por el legislador (divorcio voluntario y rectificación de actas del estado civil) y por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (nulidad de contratos), como excepción a la condena en costas que prevé la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues, en primer lugar, el texto del artículo 4 de dicho código, al establecer que el objetivo del ejercicio de la acción reivindicatoria es "*para que se declare que le corresponde el dominio*", sólo puede entenderse como un mandato en el sentido de que el particular debe acudir ante un tribunal jurisdiccional para que éste decida respecto de la procedencia o no de la acción reivindicatoria.

---

[8] "Artículo 4. La acción reivindicatoria compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil."

42. Lo anterior no desatiende que en la referida fracción I del numeral 129 se establece como hipótesis "*cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por autoridad judicial*", esto es, que se alude a la palabra "*ordena*", y que en el texto del artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles del Estado no se incluye expresamente dicha locución u otra con significado análogo; sin embargo, ello no da lugar a estimar que no se da el supuesto de excepción de pago de costas que se ha venido analizando, pues no debe perderse de vista que, conforme a la exposición de motivos que se transcribió en párrafos que anteceden, la intención del legislador fue la de prohibir que se condene en costas a la parte perdidosa que está imposibilitada para obtener de manera privada el efecto jurídico que se busca mediante el juicio, por lo que es claro que no es la inclusión de la aludida expresión en la norma la que da pauta para determinar si una acción debe o no ser resuelta indefectiblemente por la autoridad judicial.

43. Y, en segundo lugar, porque no es posible que las partes obtengan de manera privada el efecto jurídico que se busca con el ejercicio de la aludida acción, esto es, el de que se declare si a quien se ostenta como dueño de la cosa que no tiene en posesión, le corresponde el dominio de ella, por las razones siguientes:

a) Porque para ello es necesario un análisis legal y jurídico del título de propiedad en que se apoya la pretensión del actor, o en un dado caso, la excepción del demandado, lo que desde luego, sólo puede hacerse válidamente por el Juez correspondiente, pues dejarlo al arbitrio de las partes contendientes, o autoridad diversa a la judicial, trastocaría el derecho fundamental de seguridad jurídica contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 82/2010.

44. Se afirma así, porque en el segundo párrafo del numeral constitucional en cita se establece expresamente que son los tribunales del país quienes deben administrar justicia a los particulares conforme a los plazos y términos que fijen las leyes; luego, si los aspectos relativos al derecho de propiedad se encuentran regulados expresamente en un ordenamiento legal, esto es, en el Código Civil del Estado, específicamente en el título cuarto, entonces, es claro, que sólo la autoridad jurisdiccional es quien puede decidir las cuestiones que respecto de ese derecho real se susciten entre particulares.

b) Porque aun en el eventual caso de que las partes concertaran extrajudicialmente sobre quién de ellas es la propietaria de la cosa, ese acuerdo no podría ser oponible frente a terceros o alegarse en un diverso juicio, al no

tener las características de un título registrable ante el órgano encargado de dar publicidad a los actos jurídicos.

45. Cierto, el artículo 2884 del Código Civil del Estado establece que sólo se inscribirán en el Registro Público:

"**Artículo 2884.** Sólo se registrarán:

"**I.** Los testimonios de escritura pública u otros documentos auténticos;

"**II.** Las sentencias y providencias judiciales certificadas legalmente;

"**III.** Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el registrador, la autoridad municipal o el Juez del lugar se cercioró de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por las mencionadas autoridades y llevar el sello de la oficina respectiva."

46. Así, es claro que ese acuerdo al que pudieran llegar las partes no se ubica en ninguna de las hipótesis antes transcritas, porque:

i) No se trata de un testimonio de escritura pública, pues aun cuando las partes acudieran ante un notario público, a fin de expresar su voluntad, lo cierto es que ésta no podría plasmarse en un instrumento de tal naturaleza, pues de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes,[9] la escritura pública constituye un instrumento en el que se hace constar un acto jurídico y la manifestación respecto de quien tiene un mejor título de propiedad no tiene esas características.

ii) No constituye una sentencia o providencia judicial, porque precisamente, esa declaración no proviene de una autoridad judicial a virtud de haberse instado un procedimiento judicial.

iii) Si se plasmara en un documento privado, éste no sería válido conforme a la ley, pues como ya se dijo, los particulares no pueden decidir a su arbitrio, cuál título de propiedad es mejor que otro.

---

[9] "**Artículo 33 Bis.** Escritura es el instrumento original que el notario asienta en el protocolo para hacer constar un acto jurídico y que tiene la firma y el sello del notario."

c) Porque la posibilidad de que las partes pacten en forma privada sobre quién tiene la calidad de propietario de un bien, podría constituir fraude a terceros, pues bastaría que dos personas –que incluso pueden carecer de título– se pongan de acuerdo para establecer que una de ellas tiene mejor título de propiedad que la otra respecto de una cosa y que le corresponde su dominio, para perjudicar a quien sí tiene el carácter de propietario.

47. Conforme a todo lo expuesto, se concluye que cuando se hace valer la acción reivindicatoria prevista en el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, se actualiza la excepción de condena en costas que prevé el artículo 129, fracción I, de la citada codificación, pues dicha acción necesariamente debe ser decidida por autoridad judicial y, por ende, no puede imputarse a la parte perdidosa la falta de composición voluntaria de la controversia.

48. De acuerdo con las consideraciones que se han expuesto, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, en términos del artículo 225 de la Ley de Amparo, el criterio que sustenta este Pleno del Trigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes:

COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. El artículo indicado establece excepciones a la regla general de condena en costas prevista en el artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, al señalar que para no condenar en costas a la parte que pierde en el juicio, es necesario que: I. No le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia; y II. Haya limitado su actuación en el desarrollo del proceso a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio. Así, en la primera hipótesis, a la parte no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, entre otros supuestos, cuando la ley ordena que se decida necesariamente por la autoridad judicial. Ahora bien, conforme al artículo 4o. de la codificación citada, la procedencia de la acción reivindicatoria tiene como efecto jurídico declarar que corresponde al propietario de la cosa, cuya posesión no tiene, su dominio, y que el poseedor debe entregársela con sus frutos y accesiones; en consecuencia, como no existe posibilidad de que las partes obtengan dicho efecto jurídico sin ocurrir ante los tribunales, se concluye que esta norma contiene un mandato para que el particular acuda ante el órgano jurisdiccional para que se pronuncie respecto de la procedencia o improcedencia de la reivindicación, y por tanto, cuando se ejerce la acción correspondiente, se actualiza

un caso de excepción para condenar en costas conforme al artículo 129 referido, consistente en que al perdedor no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis a que este expediente se refiere, en los términos del considerando V de esta resolución.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno del Trigésimo Circuito, en los términos de la tesis redactada en el considerando VI del presente fallo.

TERCERO.—Remítase las tesis que se sustenta en la presente resolución en el plazo de quince días a la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada del Semanario Judicial de la Federación, para su publicación, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese la anterior determinación a los Tribunales Colegiados contendientes y, por vía electrónica, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Trigésimo Circuito, **por mayoría** de cuatro votos de los Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado Servín, Esteban Álvarez Troncoso y Silverio Rodríguez Carrillo. Los Magistrados Álvaro Ovalle Álvarez y Lucila Castelán Rueda votaron en contra.

Firman los Magistrados integrantes del Pleno del Trigésimo Circuito Lucila Castelán Rueda (presidenta), Silverio Rodríguez Carrillo (ponente), Álvaro Ovalle Álvarez, José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado Servín y Esteban Álvarez Troncoso, por ser quienes participaron en la decisión de que se trata, con fundamento en el artículo 41-Bis-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, juntamente con la secretaria de Acuerdos licenciada Ydolina Chávez Orona, que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular expresado por la Magistrada Lucila Castelán Rueda, en la contradicción de tesis 5/2014.

Como se destaca en la sentencia de la mayoría, para que la parte perdedora en el juicio pueda resultar absuelta del pago de costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 129, párrafo primero, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, es necesario que concurran los supuestos siguientes:

1. Que no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia; y,

2. Que haya limitado su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio.

Estos requisitos son concurrentes, ya que si alguno de ellos no se da, no sería factible exonerar a la parte perdedora en el juicio del pago de costas. Ahora bien, en relación con el primer enunciado, el precepto mencionado enumera, a su vez, los casos en los que se entiende que a la parte perdedora no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, siendo éstos, a saber:

1. Cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por la autoridad judicial;

2. Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en sustituir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes; y,

3. Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad.

En el caso concreto, la mayoría de los integrantes de este Pleno de Circuito concluyó que, en relación con la acción real reivindicatoria, se actualiza el primero de los supuestos previamente mencionados, en virtud de que, sostuvieron, que dicha acción debe ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, por así ordenarlo el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

Pues bien, como lo sostuve en la sesión en la que se discutió este asunto, no estoy de acuerdo con aquella tesis, ya que, en mi opinión, en la ley no existe disposición expresa que mande que la controversia en la que se ejerce la acción reivindicatoria deba decidirse necesariamente por los órganos jurisdiccionales y, por consiguiente, no existe prohibición alguna para que las partes válidamente puedan avenirse en torno a la pretensión de reivindicación y evitar así la contienda judicial ya iniciada.

Con el propósito de sustentar legalmente la afirmación anterior, me permito exponer aquí algunas ideas que, en relación con la resolución de diversos casos (uno de ellos, la acción de nulidad) he sostenido precisamente como consecuencia de la interpretación que debe darse al enunciado normativo contenido en el citado artículo 129, fracción I.

El artículo 4o. del código adjetivo civil de esta entidad federativa, a la letra, dispone:

"**Artículo 4o.** La reivindicación compete al propietario de la cosa que no la tiene en su posesión, para que se declare que le corresponde el dominio de ella y que el poseedor se la entregue con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil."

La literalidad de este precepto pone de relieve que no ordena, como lo exige el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, que la acción reivindicatoria deba ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, pues de su texto no se advierte mandato alguno en ese sentido.

En efecto, de los términos en los que se encuentra redactada la disposición legal se advierte que dicha norma únicamente da por supuesto, lo que es distinto a ordenar, que es el Juez quien declara que es al actor reivindicante a quien le corresponde el dominio de la cosa y que el poseedor (demandado) se la entregue con sus frutos y accesiones.

Vale la pena destacar que el vocablo "*orden*" a que se refiere la fracción I del artículo 129 del código procesal civil, en su acepción jurídica, según el *Diccionario Jurídico Espasa*, página 1060, significa, desde el punto de vista más general, toda prescripción imperativa, verbal o escrita, de ejecutar u omitir una determinada acción cualquiera que sea su naturaleza.

En similar sentido, Eduardo J. Couture, en su obra intitulada "*Vocabulario jurídico*", de la editorial Depalma, sexta reimpresión, Buenos Aires 1997, páginas 435 y 436, define la locución "*orden*", en los siguientes términos: "*Orden. I. Definición. 1. Serie o sucesión de las cosas en el lugar que les corresponde. 2. Mandato que se debe obedecer, acatar y ejecutar. 3. Elipsis de 'orden público' (Véase esta locución). 4. Paz social, pública tranquilidad*."

Luego, si tomamos en cuenta que de acuerdo con el artículo 129, fracción I, del código adjetivo civil vigente en el Estado de Aguascalientes, se requiere que la ley ordene, es decir, que prescriba de manera imperativa o prevea un mandato, en el sentido de que las controversias sobre reivindicación deban decidirse por la autoridad judicial, es de concluirse que no hay tal prescripción o mandato en el precepto de la legislación adjetiva civil transcrito con antelación (artículo 4o.).

Y como el mencionado artículo 129, fracción I, contiene excepciones a la regla general de condenación en costas, prevista en el numeral que le antecede, su interpretación debe hacerse conforme al principio general de derecho que dice: "*exceptio est strictissimae interpretationis*", es decir, que sus disposiciones deben interpretarse en sentido estricto.

Por ello, en la aplicación de la referida norma adjetiva debe estarse a su letra, conforme al derecho fundamental de legalidad previsto por el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, y acorde con la técnica de interpretación declarativa o literal a la que alude Ricardo Guastini en su obra: "*Estudios sobre la interpretación jurídica*", de la editorial Porrúa, quinta edición, México 2003, página 26, la cual es conceptuada como la interpretación que atribuye a una disposición su significado "*literal*", es decir, el más inmediato –*el significado prima facie, como suele decirse*– que se desprende del uso común de las palabras y de las reglas sintácticas.

Sigue diciendo el autor en consulta: Al calificar una interpretación como "*literal*" se subraya que hace referencia al significado exactamente literal de la disposición interpretada. Al calificarla como "*declarativa*" se hace hincapié en que se refiere más

bien al significado querido (o que se supone querido) por el legislador, asumiendo que el legislador interpreta lo que dijo "*al pie de la letra*".

Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8o. del Código Civil del Estado de Aguascalientes, las leyes que establecen excepciones a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes; de ahí que, para que tenga aplicación la excepción de no imputabilidad de la falta de composición voluntaria de la controversia contenida en la fracción I del artículo 129 del código adjetivo civil en vigor, es indispensable que en la legislación correspondiente esté expresamente prevista la orden de que determinada controversia debe ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, lo que, según se ha visto, no sucede respecto de la acción real reivindicatoria.

Con base en lo anterior, si el legislador no ordenó en el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, que las controversias sobre reivindicación necesariamente deben decidirse por la autoridad judicial, lo que no excluye que las resuelvan, la disposición contenida en él no puede dar sustento a los motivos que la mayoría de este Pleno de Circuito expuso para concluir que, en la especie, la ley ordena que ese tipo de asuntos deban decidirse por los órganos jurisdiccionales y utilizar este argumento, no para dejar de resolver la controversia, aspecto éste que, por cierto, no es el que está a discusión, sino para absolver a la parte actora del pago de costas.

Y desde luego que a ese precepto de la legislación adjetiva civil no podría dársele un significado más extenso que el que deriva de su propia literalidad, pues, se reitera, ninguna de las palabras en él utilizadas permite la posibilidad de ser entendida como "orden", es decir, como prescripción imperativa o mandato de que las cuestiones de reivindicación necesariamente deban decidirse por la autoridad judicial, teniendo aplicación en esta parte el *argumento a contrario*, como argumento interpretativo, que se aduce en favor de la técnica de interpretación declarativa o literal referida anteriormente, el cual es definido en la obra citada en este voto, de la siguiente forma:

"Se argumenta a contrario siempre que se aduce que *ubi lex voluit dixit, ubi tacuit noluit*; es decir, el legislador ha dicho exactamente lo que quería decir y es evidente que lo que no ha dicho no quería decirlo; si hubiese querido decirlo, lo habría dicho. Como se pone de manifiesto, el argumento se rige por la presunción de una perfecta correspondencia entre la intención del legislador y el texto normativo.

"Esta forma de argumentar pretende excluir que a una determinada disposición normativa pueda atribuírsele un significado más amplio (más extenso) que el que se desprende de su interpretación literal. No excluye, sin embargo, que a la disposición en cuestión pueda aplicársele un significado más restringido que el literal, y quizá por esta razón el argumento a contrario es reducido tanto a la interpretación literal como a la interpretación restrictiva."

Cabe agregar que la exposición de motivos que se transcribe en la ejecutoria de la mayoría, correspondiente al Código Federal de Procedimientos Civiles promulgado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de

febrero de mil novecientos cuarenta y tres, en relación con el cual, concretamente en el apartado de costas, se inspira el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, efectivamente, refiere que el legislador indicó que no había razón alguna para fincar la responsabilidad de la falta de composición de la controversia y, en consecuencia, de los gastos ocasionados, entre otros casos, en los que la ley no permite la composición privada, ejemplificando los relativos al divorcio voluntario, los de rectificación de las actas del Registro Civil y otros análogos.

Empero, respecto de los dos primeros ejemplos la ley sí es categórica, es decir, sí contiene orden expresa en cuanto a que ese tipo de asuntos deben ser resueltos por la autoridad judicial, lo que, desde luego, implica una prohibición para que pueda existir la composición privada de ellos, ya que respecto del divorcio y la rectificación de las actas del Registro Civil los artículos 106 y 128 del Código Civil del Estado así lo disponen, al señalar:

"**Artículo 106.** La sentencia ejecutoria que decrete un divorcio será enviada mediante copia certificada por el Juez al Oficial del Registro Civil que corresponda para que se realice el registro respectivo."

"**Artículo 128.** La nulificación, rectificación o modificación de un registro de estado civil así como su reposición, no puede hacerse sino mediante sentencia ejecutoria, salvo reconocimiento que voluntariamente haga su progenitor de su hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este código."

Del texto de ambas disposiciones legales puede advertirse que, aunque no contienen propiamente alguna locución que pueda conceptuarse como "orden" de que las controversias a las que se refieren deban decidirse necesariamente por la autoridad judicial, su propio texto conlleva a deducirla, ya que, tratándose del **divorcio, para que proceda realizar la anotación de él en el Registro Civil, es requisito sine qua non el dictado de una sentencia con el carácter de ejecutoria que así lo haya decretado**; mientras que, en cuanto al **registro del estado civil**, su nulificación, rectificación o modificación, así como su reposición, **no puede hacerse sino mediante sentencia ejecutoria**; de modo que, en estos supuestos, el convenio que, en su caso, pudieran celebrar las partes, no tendría el alcance de solucionar el litigio, puesto que en ellos se requiere, de manera indispensable, el pronunciamiento (en sentencia) que sobre cada una de estas acciones realice el Juez, lo cual pone en evidencia que en estos casos, evidentemente, no se permite la composición privada y, en vía de consecuencia, para obtener la aludida solución, las partes tendrían que acudir ante los tribunales.

Ello no sucede, en mi opinión, en relación con la acción real reivindicatoria, puesto que en relación con ella ha quedado de manifiesto que no existe orden alguna en el sentido de que deba ser decidida necesariamente por la autoridad judicial, pero aún más, considero que sobre tal acción sí existe la posibilidad de que las partes obtengan el efecto jurídico que buscan mediante el juicio.

Así es, si dicha acción compete al propietario de la cosa, que no la tiene en posesión, para que se declare que le corresponde el dominio de ella y que el poseedor (demandado) se la entregue con sus frutos y accesiones; ello quiere decir que el reivindicante, al

tener la calidad de propietario, cuenta con algún título que lo legitima para reivindicar, pues de otro modo (si no tuviera título) no competería a él el ejercicio de dicha acción.

Luego, como la referida acción se da entre una persona (actor) que le reviste la calidad de propietario, y otra persona (demandado) que tiene en posesión la cosa respecto de la cual aquél tiene un título que lo legitima para reivindicar, ello conduce a establecer que en relación con dicha acción sí es posible la composición privada.

Baste para ello, como ejemplo, el caso en el que el demandado reconoce que el actor sí es el propietario de la cosa que aquél posee, y que, ante ello, consiente en entregarla (incluso, con sus frutos y accesiones). En esta hipótesis, advierto que no existe impedimento alguno para que la controversia termine de manera anormal, pues en tal caso no será necesario el pronunciamiento de sentencia alguna; y sobre ello, seguramente que se han presentado un sin número de casos en los tribunales locales en los que la controversia de reivindicación ha sido resuelta de este modo.

En efecto, en esa hipótesis no será necesario el pronunciamiento de alguna sentencia, en virtud de que el actor habrá obtenido lo pretendido (la posesión de la cosa de la cual es titular) debido a que el demandado lo ha reconocido como propietario y, además, ha consentido en entregar dicha posesión, razón por la cual, constreñir a las partes a que exista alguna declaración por parte del Juez no encuentra, a mi modo de ver, respaldo en alguna disposición legal y, por el contrario, atenta contra la expeditez en la administración de justicia.

No se opone a lo anterior, lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 68/2010, pues el argumento que aquélla expresó para sostener que las acciones de nulidad necesariamente deben decidirse por la autoridad judicial se apoya, más que en la interpretación de la disposición legal (artículo 2097 del Código Civil), en el hecho de que nuestro sistema jurídico no reconoce la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que determina que éstas deben declararse por autoridad judicial, en todos los casos y previo procedimiento formal correspondiente, tal como se observa del texto de la aludida jurisprudencia, identificada con la clave 1a./J. 68/2010, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, registro digital 163379, página 6, con el rubro y texto siguientes:

"COSTAS. CUANDO SE HACE VALER LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CONTRATOS SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.—El artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes dispone la regla general para la condena al pago de gastos y costas; y el artículo 129 del mismo ordenamiento, establece excepciones a dicha regla, para no condenar en costas a la parte que pierde en el juicio, siempre que se presenten los supuestos siguientes: I. que no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia; y II. que haya limitado su actuación en el desarrollo del proceso a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio. Así, en el primer supuesto, a la parte perdidosa no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia cuando: a) la ley ordena que se decida necesariamente

por la autoridad judicial; b) consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en sustituir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes; y, c) en el caso de la demandada, que haya sido llamada a juicio sin necesidad. Por otra parte, tratándose de acciones de nulidad, el artículo 2097 del Código Civil de la misma entidad, prevé que los efectos producidos provisionalmente por el acto declarado nulo se destruirán retroactivamente cuando se pronuncie por el Juez la nulidad. En ese sentido, **si se tiene en cuenta que de la interpretación de dicho artículo se advierte que éste impone a los particulares una orden para que acudan ante órgano jurisdiccional a fin de que se pronuncie respecto de la procedencia o improcedencia de la acción de nulidad, máxime que nuestro sistema no reconoce la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que determina que éstas deben declararse por autoridad judicial, en todos los casos y previo procedimiento formal correspondiente**, es indudable que cuando se hace valer la acción de nulidad de contratos se actualiza un caso de excepción para condenar en costas previsto en el artículo 129 del código adjetivo civil de Aguascalientes, consistente en que a la perdidosa no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia."

–Énfasis añadido en este voto–

Tampoco se opone al criterio sustentado en este voto la contradicción de tesis 35/98, cuya ejecutoria se transcribe parcialmente en la sentencia de la mayoría, pues en ella el Alto Tribunal de la Nación hizo referencia al efecto que tiene la emisión de una sentencia en un juicio de reivindicación (declarar que el actor tiene el dominio de ella y que el demandado se la entregue con sus frutos y accesiones), lo cual tiene aplicación cuando entre las partes no existió avenimiento alguno, supuesto en el cual, evidentemente, ese es el efecto de la sentencia en un juicio reivindicatorio; empero, ese pronunciamiento no puede tener el alcance de establecer que la referida acción deba decidirse necesariamente por la autoridad judicial, pues lo decidido por la Sala mencionada se realizó, obviamente, en el contexto en el que se suscitaron las controversias que generaron las resoluciones discordantes entre los Tribunales Colegiados de Circuito.

Por último, no comparto las razones expresadas en la ejecutoria de la mayoría, para sostener que no es posible que en la acción reivindicatoria las partes puedan obtener, de manera privada, el efecto jurídico buscado con el ejercicio de dicha acción; lo anterior, en virtud de lo que he expresado con antelación, pero, sobre todo, porque no es del todo exacto que deba realizarse un análisis legal y jurídico del título de propiedad exhibido por el actor, ya que dicho análisis sería innecesario si ambas partes acuerdan la recepción y entrega de la cosa perseguida; siendo que, además, lo acordado por las partes no es lo que resulta oponible a terceros, sino el título que tenga el actor reivindicante, ya que será este último el que habrá de estar inscrito en la oficina registral para que esté en posibilidad de surtir tales efectos.

Así las cosas, contrariamente a lo sostenido por la mayoría, sigo sosteniendo mi criterio en el sentido de que, tratándose de la acción reivindicatoria, no se actualiza la hipótesis de excepción de la condena forzosa en costas a que hace referencia el artículo 129, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes y, como consecuencia, en ese tipo de asuntos, desde mi perspectiva, sí es dable condenar a la parte perdedora al pago de las costas judiciales.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular del Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez en la contradicción de tesis 5/2014.

En la sesión de seis de marzo de dos mil quince, el Pleno del Trigésimo Circuito resolvió, por mayoría de votos, la contradicción de tesis 5/2014, surgida entre los dos Tribunales Colegiados existentes en este circuito, cuya materia consistió en determinar si la acción reivindicatoria prevista en el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, debe ser decidida necesariamente por autoridad judicial, para efectos de eximir, a la parte perdidosa, del pago de costas en términos del artículo 129, párrafo segundo, fracción I, del mismo código, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado de Circuito sostiene que la intervención de la autoridad judicial, es absolutamente indispensable, el otro tribunal considera lo contrario.

La decisión del mencionado Pleno de Circuito fue en sentido coincidente con el Primer Tribunal Colegiado y, para ello, se apoyó en las razones que en seguida se sintetizan, en lo esencial:

1. Luego de transcribir y desglosar el artículo 129 del código en cita, para precisar el supuesto en debate, se hizo referencia a que el legislador local se había inspirado en el Código Federal de Procedimientos Civiles para conformar el sistema de costas, por lo que se estimó necesario reproducir la exposición de motivos de dicho ordenamiento legal.

2. Se dijo que de tal exposición se advertía que el motivo que dio lugar a determinar que a la parte perdedora no le es imputable **la falta de composición voluntaria de la controversia**, deriva de que es la ley la que ordena su decisión forzosa por autoridad judicial; de modo que la propia ley **no permite** la composición privada, por lo que no existe posibilidad alguna de que las partes, sin acudir a los tribunales, obtengan el efecto jurídico que buscan en el juicio.

3. Respecto de esa hipótesis –que la ley ordene que la controversia se decida necesariamente por autoridad judicial– la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 82/2010, la cual originó la jurisprudencia 1a./J. 68/2010, de rubro: "COSTAS. CUANDO SE HACE VALER LA ACCIÓN DE NULIDAD DE CONTRATOS SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.", en cuya ejecutoria externó diversas consideraciones [que, al efecto, se sintetizan en los incisos A), B), C), D), F) y G) del punto 34], de las que se advierte que para concluir que la acción de nulidad de contratos necesariamente debe decidirla la autoridad judicial, atendió a dos aspectos fundamentales: primero, si las partes pueden convenir de manera privada y obtener los mismos efectos jurídicos que se buscan con la tramitación del juicio y, segundo, a la redacción de la norma que establece la citada acción.

4. Con base en ello, el Pleno del Trigésimo Circuito consideró en los puntos 37 a 44 del fallo, que, en tratándose de la acción reivindicatoria, también operaba la excepción de pago de costas, en virtud de que, por un lado, no era viable que las partes obtuvieran, de manera privada, el efecto jurídico pretendido con el ejercicio de esa acción, esto es, la declaratoria de que al propietario de la cosa, que no la tiene en posesión, le corresponde el dominio de ella, puesto que para esto es indispensable el análisis jurídico del título de propiedad o, en su caso, de la excepción, lo que sólo puede hacer válidamente el Juez; además de que algún eventual convenio de las partes sobre el particular, no podría ser oponible a terceros ni alegarse en diverso juicio, por no tener las características de documento registrable, acorde con el artículo 2884 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.

Y por el otro lado, la redacción del artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al prever que el propósito que se busca con la acción reivindicatoria es que "*se declare que le corresponde el dominio*", debe entenderse como un mandato para que el particular (forzosamente) acuda ante el órgano jurisdiccional.

Precisado lo anterior, y a fin de exponer mi postura al respecto, es indispensable transcribir el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, por ser el que prevé los casos en que debe eximirse al perdedor del pago de costas:

"Artículo 129. No será condenada en costas la parte que pierde, si no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, y, además, limitó su actuación, en el desarrollo del proceso, a lo estrictamente indispensable para ser (sic) posible la definitiva resolución del negocio.

"Se entiende que no es imputable a la parte la falta de composición voluntaria de la controversia:

"I. Cuando la ley ordena que sea decidida necesariamente por autoridad judicial;

"II. Cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en substituir el arbitrio judicial a las voluntades de las partes; y

"III. Tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad."

Ciertamente, en la norma legal transcrita se establece, como *conditio sine qua non* para no condenar a costas al perdidoso, que no le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia (sumada a que haya limitado su actuación en el juicio a lo estrictamente indispensable) y se señalan los casos en que debe entenderse que existe tal imposibilidad, entre ellos, cuando la ley ordena que aquélla sea decidida necesariamente por autoridad judicial.

En la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles, tocante a ese supuesto, se dice que la ley **no permite** la composición privada de la controversia como sucede en los casos de divorcio, de rectificación de actas del estado civil u otros análogos y que, por ende, **no hay posibilidad** legal de que las partes **obtengan el efecto jurídico** que buscan mediante el juicio, sin ocurrir a los tribunales.

Ahora bien, aunque la acción reivindicatoria, según lo prescribe el artículo 4o. del Código de Procedimientos Civiles del Estado, compete al propietario de una cosa –mueble o inmueble– que no la tiene en posesión y su efecto es que se declare (judicialmente) que él tiene el dominio sobre ella para que el demandado se la entregue con sus frutos y accesiones; de ello no se sigue que dicha norma no permita la composición privada y que no exista la posibilidad legal de obtener el efecto jurídico deseado sin ocurrir ante los tribunales, pues salta a la vista que el propósito –efecto– perseguido por el propietario de la cosa, único legitimado, al ejercer la citada acción, es obtener la posesión mediante su entrega; de modo que salta a la vista que, sin promover juicio reivindicatorio, el propietario puede lograr –a través de la composición privada– el efecto jurídico perseguido, esto es, la devolución de la cosa de su propiedad, pues sería ilógico pensar que aun cuando existiese disposición de parte del poseedor de devolver la cosa a su propietario, éste no estuviera en posibilidad legal de recibirla por ser necesaria la promoción de un juicio en el que se declare que él tiene el dominio y se condene al poseedor-demandado a devolvérsela.

En realidad, esto último (necesidad de que se declare judicialmente que al actor-propietario le corresponde el dominio de la cosa) es en lo que se apoya la mayoría del Pleno de Circuito para sostener la imprescindible intervención judicial, es decir, se considera como una condición indispensable para que el demandado-poseedor entregue la cosa, la previa declaratoria judicial de dominio, pero con ello se olvida que tal declaratoria se hace precisamente porque se promovió el juicio y lo mismo se haría, por ejemplo, si se promueve la terminación o rescisión de un contrato de arrendamiento, pues también se emitiría una declaración judicial de terminación o rescisión, por lo que resulta claro que la declaración judicial –en sí misma considerada– no conduce a interpretar que la ley no permite la composición privada de la controversia y que, por ello, tampoco es factible obtener el efecto jurídico perseguido sin ocurrir ante la autoridad judicial, pues bastaría con que el poseedor de la cosa, ante la demostración de la propiedad, la entregara a su propietario, para que no hubiera necesidad de ser demandado judicialmente.

El punto de vista mayoritario se sustenta, también, en que para la obtención del efecto jurídico es necesario el análisis legal del título de propiedad o, en su caso, de la excepción del demandado, lo cual sólo puede hacer válidamente el Juez, ya que en el eventual supuesto de que la partes concertaran extrajudicialmente quién de ellas es propietaria de la cosa, no podrían oponer su acuerdo a terceros ni alegarlo en juicio diverso, por no tener las características de título registrable ante el órgano encargado de dar publicidad a los actos jurídicos.

Sin embargo, al apoyarse en tal fundamento el fallo, no se toma en cuenta que la acción reivindicatoria compete precisamente al propietario de la cosa que no tiene en posesión y que la sentencia correspondiente **no es constitutiva de tal calidad** para que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, puesto que uno de los elementos que previamente debe estar satisfecho y acreditarse ante el Juez, es, justamente, la propiedad, por lo que es el propietario, y no otra persona, quien puede intentar la composición privada de la controversia, es decir, que quien posee el inmueble o mueble de su propiedad se lo devuelva con sus frutos y accesiones, sin necesidad de ocurrir a los tribunales.

Un posible arreglo entre las partes sobre quién es el propietario de la cosa, sin que se tenga esta calidad, según ejemplo que se pone, es irrelevante y de ningún modo

perjudica al verdadero propietario, pues de todas formas éste tiene a su disposición la acción reivindicatoria, así como la posibilidad de obtener de manera privada la entrega de la cosa.

Puede haber factores, ciertamente, que impidan la composición privada de la controversia, pero esto no implica que, ante ellos, se surta en automático la hipótesis de la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, motivo de la contradicción de tesis, pues no debe olvidarse que en ese precepto se previeron dos supuestos más, conforme a los cuales debe entenderse que no es imputable a la parte que pierde la composición voluntaria, a saber: cuando consista en una mera cuestión de derecho dudoso, o en sustituir el arbitrio judicial a la voluntad de las partes (fracción II); y, tratándose de la demandada, cuando haya sido llamada a juicio sin necesidad (fracción III).

En efecto, en lo tocante al caso de la fracción II, se dijo en la exposición de motivos que, **al no estar determinado incontrovertiblemente el derecho**, precisamente por ser dudoso o por tratarse de una cuestión de mero arbitrio, debe concluirse que **no fue posible llegar a una composición voluntaria, por no haber razón que impusiera a uno de los contendientes someterse a la estimación de su contrario** (de lo cual se sigue que cuando el derecho no es dudoso y existe, por ende, razón para que una de las partes se someta a la apreciación de su contraria, nada impide la composición voluntaria). Y, en lo que concierne a la fracción III, se expresó que no puede decirse que el demandado haya dado lugar al juicio, cuando no tocaba a él tomar la iniciativa para obtener la composición.

En el caso de la acción reivindicatoria, es claro que toca al propietario de la cosa tomar la iniciativa para la composición voluntaria, pues de no mediar las circunstancias de la fracción II –derecho dudoso o sustitución del arbitrio judicial– ante el ejercicio de esa acción por el propietario que no intentó previamente dicha composición, bien podría el demandado aducir en su contestación lo innecesario que resultaba la demanda, pues él hubiera entregado el bien de habérselo solicitado el propietario demandante.

Por tales razones, entre otras, discrepé de la decisión mayoritaria del Pleno del Trigésimo Circuito.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 68/2010 citada en este voto, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 6.

Este voto se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA

EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. El artículo indicado establece excepciones a la regla general de condena en costas prevista en el artículo 128 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, al señalar que para no condenar en costas a la parte que pierde en el juicio, es necesario que: I. No le sea imputable la falta de composición voluntaria de la controversia; y II. Haya limitado su actuación en el desarrollo del proceso a lo estrictamente indispensable para hacer posible la definitiva resolución del negocio. Así, en la primera hipótesis, a la parte no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia, entre otros supuestos, cuando la ley ordena que se decida necesariamente por la autoridad judicial. Ahora bien, conforme al artículo 4o. de la codificación citada, la procedencia de la acción reivindicatoria tiene como efecto jurídico declarar que corresponde al propietario de la cosa, cuya posesión no tiene, su dominio, y que el poseedor debe entregársela con sus frutos y accesiones; en consecuencia, como no existe posibilidad de que las partes obtengan dicho efecto jurídico sin ocurrir ante los tribunales, se concluye que esta norma contiene un mandato para que el particular acuda ante el órgano jurisdiccional para que se pronuncie respecto de la procedencia o improcedencia de la reivindicación, y por tanto, cuando se ejerce la acción correspondiente, se actualiza un caso de excepción para condenar en costas conforme al artículo 129 referido, consistente en que al perdedor no le es imputable la falta de composición voluntaria de la controversia.

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
PC.XXX. J/11 C (10a.)

Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 6 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado Servín, Silverio Rodríguez Carrillo y Esteban Álvarez Troncoso. Disidentes: Lucila Castelán Rueda y Álvaro Ovalle Álvarez. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretaria: Lisbet Catalina Soto Martínez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 548/2010, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos directos 362/2011 y 635/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 18 DE FEBRERO DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE VALENCIA MÉNDEZ Y RODOLFO ALBERTO BANDALA ÁVILA. DISIDENTE: MARÍA DE FÁTIMA ISABEL SÁMANO HERNÁNDEZ. PONENTE: RODOLFO ALBERTO BANDALA ÁVILA. SECRETARIO: DAVID JESÚS VELASCO SANTIAGO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno del Decimotercer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la vigente Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo publicados en dicho medio oficial el treinta de mayo de dos mil catorce, que abrogó el Acuerdo General 14/2013 del propio Pleno, publicado en el referido órgano de difusión el catorce de junio de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de un mismo circuito, en un tema que, por la naturaleza de ambos órganos jurisdiccionales corresponde a la materia de una de sus especialidades, la administrativa.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por la Magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, quien se encuentra

facultada para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII,[1] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,[2] de la Ley de Amparo vigente.

TERCERO.—**Criterios contradictorios.** La denuncia que dio origen a esta contradicción de tesis, se refiere a sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en Materias Civil y Administrativa y en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos de este Décimo Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 58/2014 y 252/2014, respectivamente.

1. El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, al resolver el amparo directo 58/2014, en contra de la resolución de seis de enero de dos mil catorce, dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el juicio de nulidad 1574/13-15-01-5, en lo esencial, consideró:

"SEXTO.—El análisis de los conceptos de violación, conduce a determinar lo siguiente.

"...

"**Los argumentos relatados son fundados, en atención a la causa de pedir.**

"En principio, conviene destacar, que el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, dispone: (se transcribe)

---

[1] "**Artículo 107.** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"**XIII.** Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

[2] "**Artículo 227.** La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"**III.** Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

"La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2589/2010 en sesión de dos de febrero de dos mil once, determinó que del texto del precepto transcrito (vigente a partir del dos mil siete), en esencia **se infiere lo siguiente**:

"El derecho de los particulares a presentar consultas, y la correlativa obligación de las autoridades fiscales de contestarlas, está constreñida al cumplimiento de ciertos requisitos, tales como: que se trate de consultas reales y concretas, que contengan todos los antecedentes para que la autoridad se pueda pronunciar; que éstas no se hubieren modificado con posterioridad a la presentación ante la autoridad; que sea formulada antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de lo planteado en la consulta y la obligación de acatar sus respuestas.

"La excepción a la obligatoriedad de la autoridad a la contestación efectuada a la consulta, se actualiza cuando los términos de ésta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable.

"Aunado a lo anterior, dijo la Primera Sala del Máximo Tribunal, el precepto transcrito señala que cuando las respuestas a las consultas sean desfavorables a los intereses de los contribuyentes, no son vinculantes para éstos, pues sólo podrán impugnarse por los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, cuando las autoridades apliquen dicho criterio en una resolución definitiva.

"De lo anterior, dijo la Primera Sala, se infiere que el **supuesto** de la norma es que los contribuyentes soliciten a la autoridad fiscal **una consulta de confirmación de criterio sobre una situación real y concreta de una situación fiscal**; tratándose de la **consecuencia**, la respuesta a esa consulta es vinculativa para la autoridad, únicamente.

"Ahora bien, partiendo de la base de la naturaleza jurídica de las consultas fiscales, que se infiere de la norma transcrita, es factible colegir, que como con acierto lo aduce la peticionaria de amparo, la solicitud contenida en el escrito que presentó vía correo certificado, ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente (folios 28 y 29), no constituye una consulta fiscal, formulada en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

"En efecto, el escrito de referencia es del tenor siguiente: (se inserta imagen)

"Del contenido del escrito aludido, se advierte que la ahora quejosa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente, la materialización del cambio de su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes y que la tuvieran en suspensión de actividades; solicitud que planteó con fundamento en los artículos 8o. de la Constitución Federal, 31 del Código Fiscal de la Federación, 2o., fracciones I, VIII y IX y 4o. de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; 25, primer párrafo, fracción V, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

"De lo anterior se advierte, que tal como lo sostiene la peticionaria de amparo, el escrito aludido no se trata de una consulta fiscal en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, pues la contribuyente, aquí quejosa, **no está solicitando a la autoridad fiscal la confirmación de algún criterio sobre una situación real y concreta**; sino, está pidiendo se cambie su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes **y se le tenga** en suspensión de actividades; **en consecuencia**, la respuesta que a dicha solicitud recayó, emitida por el administrador Local de Servicios al Contribuyente, y contenida en el oficio cuya nulidad solicita, esto es, el número 700-63-00-04-00-2012-06075, de treinta de agosto de dos mil trece (folio 26), **sí constituye una resolución definitiva** que al no ser favorable a la pretensión de la aquí quejosa, puede ser impugnada en juicio de nulidad; y al no considerarlo así la Sala responsable, vulneró en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

"En congruencia con lo hasta ahora expuesto, se concede a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar emita otra, en la que, conforme a las consideraciones que dan sustento a esta ejecutoria, declare fundado el recurso de reclamación, revoque el auto de treinta y uno de octubre de dos mil trece, dictado por la Magistrada instructora del juicio de nulidad 1574/13-15-01-5, y ordene que prescindiendo de reiterar las consideraciones que aquí se estimaron incorrectas, resuelva lo que en derecho corresponda acerca de la admisión de la demanda de nulidad."

2. El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, al resolver el amparo directo 252/2014, en contra de la sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, dictada por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el juicio de nulidad 1575/13-15-01-7, en lo que interesa, determinó:

"Dichos conceptos devienen fundados pero inoperantes para otorgar la protección constitucional, en razón de las consideraciones siguientes:

"En primer lugar es preciso señalar que la ahora quejosa manifestó, como hechos de su demanda, que el quince de agosto de dos mil trece, acudió ante la oficina de la Administración Local de Servicios al Contribuyente a efecto de presentar aviso de suspensión de actividades, toda vez que la empresa interrumpió toda actividad económica que le pudiera generar ingresos; sin embargo, se le manifestó verbalmente que a las personas morales no se les permitía presentar tal aviso; por lo cual, el día veintitrés siguiente, presentó vía correo certificado, aviso de suspensión de actividades, ante la citada Administración –el cual obra a fojas 29 y 30 del juicio fiscal–; y en respuesta se emitió el oficio 700-63-00-04-00-2012-06076 de treinta de agosto de dos mil trece, materia de ese juicio –foja 27 del citado expediente– en el que consta, se le comunicó que no existe en las disposiciones fiscales un procedimiento para la suspensión al Registro Federal de Contribuyentes, por lo que la empresa contribuyente tendría que disolverse y con posterioridad liquidarse para presentar el 'Aviso de Cancelación al Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo', para así darse de baja del citado registro federal.

"Los términos tanto del escrito y respuesta a los que se alude, son: (inserta imágenes).

"'Ahora bien, lo fundado de los argumentos de la quejosa resulta de que ciertamente, del contenido de las imágenes aquí trasladadas, no puede desprenderse que el apoderado de la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, haya planteado a la autoridad responsable una consulta fiscal, tomando en cuenta el significado de este concepto, consistente en que dicha consulta tiene como finalidad, generar certeza jurídica en el sujeto pasivo de la relación tributaria, respecto del criterio de la autoridad fiscal, cuando estima dudosa la interpretación y/o aplicación de alguna norma legal a una situación real y concreta.

"Así lo sostuvo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXXXIX/2011, contenida en el Tomo XXXIV, julio de 2011, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, materia administrativa, página 288: 'CONSULTA FISCAL. EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CONSTITUYE UNA NORMA DE CARÁCTER ADJETIVO O PROCEDIMENTAL.' (transcribe texto).

"'En la especie debe decirse, a pesar de que la Sala responsable considera que el escrito dirigido a la autoridad demandada, es una consulta, por el

hecho de que en el oficio impugnado se hubiera indicado se trataba de una 'orientación jurídica'; lo cierto, es que aunque fundado en el artículo 8o. constitucional, debe considerarse que bajo los lineamientos señalados, técnicamente el aviso en mención no es una consulta, porque además no se le está solicitando una opinión a la demandada, sino que se refiere a una situación particular del contribuyente, pues el propósito del escrito de mérito, fue concretamente dar 'aviso de la suspensión de actividades', a que se refiere el artículo 25, fracción V, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

"Es decir la solicitud versó en que se materializara el cambio de situación fiscal ante el Registro Federal de Contribuyentes, mediante dicho aviso de suspensión de actividades; y la autoridad al responder desfavorablemente negó su petición al considerar inexistente disposición fiscal que contemple la posibilidad de que las personas morales puedan presentar aviso de suspensión de actividades, informándole que la empresa actora tendría que disolverse y posteriormente liquidarse para presentar el 'aviso de cancelación al registro federal de contribuyentes por liquidación total del activo', para entonces darse de baja del citado Registro Federal de Contribuyentes; lo que significa que la demandada no dio respuesta a una consulta en sí, sino se pronunció en relación a una situación real y concreta presentada en forma individual por **********, en representación de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

"Empero, aunque fundado lo anterior, lo inoperante de los conceptos de violación, estriba en que la Sala responsable, estuvo apegada a derecho al considerar, que acorde con el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción XVI, de dicho normativo, en virtud de que efectivamente el juicio intentado, no se ubica en el supuesto de la fracción IV (sic) de la Ley Orgánica de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Pues de dichos preceptos ciertamente se desprende, el juicio contencioso administrativo ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo es procedente contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; que dicho tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos precisados en las fracciones previstas en el citado numeral; que para los efectos del primer párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las resoluciones se considerarán

definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"Y en el presente asunto, bien consideró la Sala responsable, el oficio impugnado no constituye una resolución definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de nulidad que ella deba conocer; porque como se advierte del citado acto de autoridad, la respuesta ahí contenida no resulta vinculatoria, no trasciende ni modifica la esfera jurídica del contribuyente, al ser un acto de carácter meramente informativo, pues la respuesta no le genera derechos u obligaciones distintos a los previstos en las disposiciones vigentes ni modifica su esfera jurídica, siendo que el derecho a impugnarla debe ejercitarse cuando las autoridades apliquen los criterios relativos en una resolución definitiva.

"Es decir, hasta que la autoridad aplique el criterio en una resolución de tal naturaleza, incidirá en la esfera jurídica del accionante, para que entonces proceda la impugnación vía juicio de nulidad.

"Por consiguiente, aunque la impetrante del amparo sostiene que el juicio fiscal es procedente en los términos del artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en ello no le asiste razón, porque las respuestas contenidas en el oficio materia de impugnación, no pueden considerarse como una resolución definitiva o acto administrativo que obligue al particular ni determina a su cargo una situación fiscal, como la determinación de un crédito o la imposición de multas; en tanto, el entorno jurídico de éste se afectará hasta que la autoridad ejerza sus facultades de fiscalización y establezca su situación fiscal.

"Lo que significa en suma, la respuesta en cuestión, no es obligatoria para la accionante, quien podrá impugnar, en su caso, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique el criterio en que basó para emitir esa contestación. Por tanto, al no reunir el acto impugnado ante la autoridad responsable, las características de procedencia del juicio de nulidad, en los términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es innegable la improcedencia del juicio fiscal.

"Es aplicable el caso en lo conducente, la tesis 2a./J. 112/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, materia administrativa, página 473: 'CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE

DESDE EL 1o. DE ENERO DE 2007, AL MODIFICAR LOS EFECTOS DE LAS RESPUESTAS QUE RECAEN A AQUÉLLAS, ES CONGRUENTE CON LA REGULACIÓN EN MATERIA FISCAL Y CON EL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS.' (transcribe texto)

"Por tanto, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de violación propuestos, debe negarse el amparo solicitado."

CUARTO.—**Precisión.** Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis o, establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál criterio debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, al no existir disposición constitucional ni legal en contrario.

Tiene aplicación la tesis del Pleno de nuestro Más Alto Tribunal, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.—Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."[3]

QUINTO.—**Existencia de la contradicción de tesis.** En primer lugar, procede determinar si, en el caso, existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que se emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Como una importante cuestión preliminar, este Pleno del Decimotercer Circuito, se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la anterior Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito,

[3] *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 83, noviembre de 1994, tesis P. L/94, página 35.

en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Se precisa que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior, se sigue, que la actual integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de ese Alto Tribunal del País o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Ello, porque la finalidad de dicha determinación, es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Por tanto, concluyó nuestro Máximo Tribunal que es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis, cuando los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método que fuese; y que entre los respectivos ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea en sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio,

la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el

análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."[4]

De igual modo, es aplicable el criterio jurisprudencial 1a./J. 23/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.'. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto 'contradictorio' ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones

[4] Registro digital: 164120, jurisprudencia, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, página 7.

se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."[5]

Ahora bien, del análisis de las sentencias transcritas se advierte que sí existe contradicción entre las tesis sostenidas por el Tribunal Colegido en Materias Civil y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos de este Decimotercer Circuito.

En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que, al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a si la respuesta dada al escrito por el que una contribuyente persona moral presenta aviso de suspensión de actividades, constituye o no una resolución definitiva que reúna las características de procedencia del juicio de nulidad en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al respecto, los Tribunales Colegiados de Circuito en mención adoptaron criterios jurídicos discrepantes, pues el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este circuito, consideró que la respuesta que recae a dicha solicitud de suspensión de actividades, **sí constituye** una resolución definitiva que al no serle favorable a la pretensión de la aquí quejosa, puede ser impugnada en juicio de nulidad, porque la contribuyente no solicita la confirmación de algún criterio sobre una situación real y concreta, sino que sólo pide que se cambie su situación fiscal y se le tenga en suspensión de actividades (**y como consecuencia concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa**).

Mientras que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del mismo circuito, sostuvo que la respuesta que recae a la solicitud de suspensión de actividades **no constituye** una resolución definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de nulidad, porque no es vinculatoria, ni trasciende ni modifica la esfera jurídica del contribuyente, al ser un acto de

[5] Registro digital: 165076, jurisprudencia, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXI, marzo de 2010, materia común, página 123.

carácter meramente informativo, pues la respuesta no le genera derechos u obligaciones, ni modifica su esfera jurídica, pues el derecho a impugnarla debe ejercitarse cuando las autoridades apliquen los criterios relativos a una resolución definitiva (**y por esas razones niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa**).

Como se advierte del análisis comparativo de los criterios referidos, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a diferentes conclusiones en relación con el mismo tema jurídico.

Asimismo, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas plasmados en las sentencias respectivas; como se advierte de las ejecutorias que obran en copias certificadas en el expediente en que se actúa, y de los argumentos expresados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes para sustentar sus criterios.

SEXTO.—**Precisión de los antecedentes del caso.** En primer término, resulta oportuno considerar los antecedentes de los asuntos del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito participantes en la divergencia de criterios que ahora se resuelve.

Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa

En el acto reclamado en el juicio de amparo directo 58/2014 del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta ciudad, lo constituye la resolución dictada el seis de enero de dos mil catorce, por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el juicio de nulidad 1574/13-15-01-5, que declaró infundado el recurso de reclamación y, por ende, confirmó el auto de treinta y uno de octubre de dos mil trece, que desechó la demanda de nulidad.

De los antecedentes del caso, cabe destacar que, ********** en representación de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Oaxaca que, por no serle económicamente viable, **la suspensión** de todas sus actividades económicas, aclarando que no tenía obligación pendiente de pago de carácter fiscal y **que no deseaba su extinción jurídica**, porque ello le acarreaba gastos económicos que no le era posible costear.

Que esa solicitud obedecía a que al ingresar al portal electrónico del Servicio de Administración Tributaria con sus datos de identificación electrónica e intentar ese trámite, el sistema le arrojaba el siguiente aviso "*no se puede completar el movimiento dado que sus características fiscales no son las indicadas para este formulario*"; por lo cual le era indispensable materializar el cambio de situación fiscal.

Por tanto, en oficio ********** de treinta de agosto de dos mil trece, el administrador local de Servicios al Contribuyente de Oaxaca resolvió la anterior solicitud, en los siguientes términos:

"En principio de cuentas, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación, la presente orientación se brinda de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, cumpliendo con las formalidades que al efecto establece el artículo 38 del referido código.

"Ahora bien, es importante señalar que en principio de cuenta se indica que las disposiciones fiscales vigentes no contemplan la posibilidad de que las personas morales puedan presentar aviso de suspensión de actividades. De este modo y derivado de que no existe disposición legal o reglamentaria que contemple el supuesto jurídico objeto de su petición, no sería factible establecer un procedimiento para presentar el aviso de suspensión de actividades.

"En efecto, es importante señalar que de conformidad con el principio de legalidad que rige al sistema impositivo mexicano, la autoridad fiscal únicamente está facultada para emitir actos que explícitamente le permitan las disposiciones legales o reglamentarias, de tal suerte que si ni el Código Fiscal de la Federación ni su reglamento establecen un procedimiento para que las personas morales presenten aviso de suspensión, esta autoridad está impedida para hacerlo.

"Ahora bien, de acuerdo con la legislación mercantil, si el contribuyente **********, S.A. de C.V., se encuentra imposibilitado para seguir realizando el objeto principal de la sociedad, en términos de lo dispuesto por los artículos 229 y 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dicha sociedad deberá ser disuelta y liquidar su activo a fin de presentar el 'aviso de cancelación al registro federal de contribuyentes por liquidación total del activo' y, con ello, darse de baja del Registro Federal de Contribuyentes.

"En efecto, los artículos 229 y 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establecen lo siguiente: (los transcribe)

"'De este modo y una vez liquidada la sociedad **********, S.A. de C.V., la misma podrá presentar el 'aviso de cancelación al registro federal de contribuyentes por liquidación total del activo', en términos del artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente: (lo transcribe).

"'Acorde a lo anterior y al no existir en las disposiciones fiscales un procedimiento para suspensión al RFC, el contribuyente **********, S.A. de C.V., deberá, en su caso, disolverse y posteriormente liquidarse para presentar el 'aviso de cancelación al Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo' y de esta forma darse de baja del RFC.

"La respuesta no le genera derechos y obligaciones distintos a los previstos en las disposiciones fiscales vigentes, no modifica su esfera jurídica al tratarse de una orientación jurídica que se brinda de conformidad con el artículo 33, fracción I, del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 14, fracción IV y 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

"Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo."

Inconforme con lo anterior, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal **********, demandó la nulidad de dicha resolución contenida en el oficio 700-63-00-04-00-2012-06075, de **treinta de agosto de dos mil trece**, empero, mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil trece, la Magistrada instructora **desechó** la demanda por no tratarse de un acto definitivo.

Contra esa determinación, la referida persona moral, por conducto de su legal representante, interpuso recurso de reclamación ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien por resolución de seis de enero de dos mil catorce, declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto y **confirmó** el auto desechatorio de treinta y uno de octubre de dos mil trece.

Esa resolución constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo directo 58/2014 del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta ciudad, quien por ejecutoria de nueve de mayo de dos mil catorce, **concedió el amparo** solicitado por la quejosa, con base en las consideraciones ya transcritas en los párrafos que anteceden.

Por otro lado, el acto reclamado en el amparo directo 252/2014, del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta ciudad, lo constituye la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en el juicio de nulidad 1575/13-15-01-7, por medio de la cual determinó fundada la causal de improcedencia de sobreseimiento y, por consecuencia, que procedía sobreseer en el juicio de nulidad.

De los antecedentes del caso, se destaca que, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal **********, solicitó ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Oaxaca que, por no serle económicamente viable, **la suspensión** de todas sus actividades económicas, aclarando que no tenía obligación alguna pendiente de pago de carácter fiscal y que **no deseaba su extinción jurídica**, porque ello le acarreaba gastos económicos que no le era posible costear, únicamente solicitaba la "suspensión de actividades".

Que esa solicitud obedecía a que al ingresar al portal electrónico del Servicio de Administración Tributaria con sus datos de identificación electrónica e intentar ese trámite, el sistema le arrojaba el siguiente aviso "*no se puede completar el movimiento dado que sus características fiscales no son las indicadas para este formulario*"; por lo cual le era indispensable materializar el cambio de situación fiscal.

En oficio ********** de treinta de agosto de dos mil trece, el administrador local de servicios al contribuyente de Oaxaca resolvió la anterior solicitud, en los siguientes términos:

"En principio de cuentas, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación, la presente orientación se brinda de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, cumpliendo con las formalidades que al efecto establece el artículo 38 del referido código.

"Ahora bien, es importante señalar que en principio de cuenta se indica que las disposiciones fiscales vigentes no contemplan la posibilidad de que las personas morales puedan presentar aviso de suspensión de actividades. De este modo y derivado de que no existe disposición legal o reglamentaria que

contemple el supuesto jurídico objeto de su petición, no serían factible establecer un procedimiento para presentar el aviso de suspensión de actividades.

"En efecto, es importante señalar que de conformidad con el principio de legalidad que rige al sistema impositivo mexicano, la autoridad fiscal únicamente está facultada para emitir actos que explícitamente le permitan las disposiciones legales o reglamentarias, de tal suerte que si ni el Código Fiscal de la Federación ni su reglamento establecen un procedimiento para que las personas morales presenten aviso de suspensión, esta autoridad está impedida para hacerlo.

"Ahora bien, de acuerdo con la legislación mercantil, si el contribuyente **********, S.A. de C.V., se encuentra imposibilitado para seguir realizando el objeto principal de la sociedad, en términos de lo dispuesto por los artículo 229 y 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dicha sociedad deberá ser disuelta y liquidar su activo a fin de presentar el 'aviso de cancelación al Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo' y, con ello, darse de baja del Registro Federal de Contribuyentes.

"En efecto, los artículos 229 y 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establecen lo siguiente: (los transcribe)

"'De este modo y una vez liquidada la sociedad **********, S.A. de C.V., la misma podrá presentar el 'aviso de cancelación al Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo', en términos del artículo 26 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el cual establece lo siguiente: (lo transcribe).

"'Acorde a lo anterior y al no existir en las disposiciones fiscales un procedimiento para suspensión al RFC, el contribuyente **********, S.A. de C.V., deberá, en su caso, disolverse y posteriormente liquidarse para presentar el 'aviso de cancelación al Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo' y de esta forma darse de baja del RFC.

"La respuesta no le genera derechos y obligaciones distintos a los previstos en las disposiciones fiscales vigentes, no modifica su esfera jurídica al tratarse de una orientación jurídica que se brinda de conformidad con el artículo 33, fracción I, del Código Fiscal de la Federación en relación con los artículos 14, fracción IV y 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

"Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo."

Contra esa determinación, la referida persona moral, por conducto de su legal representante, promovió el juicio de nulidad 1575/13-15-01-7, ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien por sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, sobreseyó en el juicio de nulidad, al considerar que el acto impugnado sólo era una respuesta a una consulta fiscal, por lo que no constituía una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio de nulidad.

Esa resolución constituyó el acto reclamado en el amparo directo 252/2014, del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta ciudad, quien por ejecutoria de trece de mayo de dos mil catorce, **negó el amparo** solicitado por la quejosa, con base en las consideraciones ya transcritas en párrafos que anteceden.

SÉPTIMO.—**Estudio de fondo.** El tema a dilucidar estriba, esencialmente, en establecer si la respuesta que recae a una solicitud de suspensión de actividades por parte de una persona moral, constituye o no una resolución definitiva contra la cual procede su impugnación en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Primeramente, se destaca que, como ambos Tribunales Colegiados de Circuito contendientes convienen en que la referida respuesta no constituye una consulta fiscal, dicho tema no amerita ningún pronunciamiento, al no existir controversia al respecto.

Ahora, precisado lo anterior, se destaca que en materia administrativa no está abierta la posibilidad de que todo acto de autoridad administrativa sea impugnable en juicio de nulidad, sino más bien se trata de un juicio de jurisdicción restringida en el que la procedencia de la vía se encuentra condicionada a que el acto a impugnar se reconozca en la norma como hipótesis de procedencia expresa de la acción contenciosa administrativa.

Para mejor compresión de lo anterior, en principio, es importante resaltar lo previsto en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dice:

"**Artículo 14.** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"…

"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores."

Dicho numeral en sus restantes fracciones, establece:

"**Artículo 14.** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

"II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

"III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

"...

"V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

"VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

"VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal;

"VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

"IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

"X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

"XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

"XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

"XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

"XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

"No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

"XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

"XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia."

Del análisis integral del precepto transcrito, se advierte que el juicio contencioso-administrativo sólo resulta procedente contra actos que posean la característica de ser "*resoluciones administrativas definitivas*" y, además, que se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia expresas de asuntos que son de la competencia del referido tribunal administrativo correspondiente.

Asimismo, la transcrita fracción IV, alude a resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, que causen agravio al gobernado, pero que sea de naturaleza distinta a las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Entonces, acorde a tal precepto legal, una resolución definitiva es aquella que no admite recurso o admitiéndolo éste sea optativo, además, también debe considerarse como aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública.

Al respecto, conviene invocar la definición que se encuentra en el *Diccionario Jurídico Mexicano*, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del tenor siguiente:

"La resolución administrativa definitiva es ejecutoria cuando la misma ya no es posible someterla a la revisión de una autoridad administrativa ni a la impugnación ante órganos jurisdiccionales."[6]

También, el concepto que se inserta en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, del tenor siguiente:

"*Resolución definitiva constituye el acto decisorio y conclusivo del procedimiento, y por la cual el propio procedimiento, adquiere el carácter de definitivo*."[7]

Ahora, en esos términos, la definitividad de una resolución administrativa para efectos del juicio de nulidad –*además de ponderar su atacabilidad a través de recursos ordinarios en sede administrativa*– la define la naturaleza de tal resolución, al constituir el producto final manifestado por la autoridad administrativa.

Dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas:

a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o,

b) Como manifestación aislada que, por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.

Así, por regla general, las resoluciones definitivas son las que culminan un procedimiento administrativo, entendido éste como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que es precisamente la emisión de la resolución administrativa definitiva, cuyos efectos producen consecuencias jurídicas.

Entonces, la generación de esta última situación combinada con la causación de un agravio objetivo, es lo que caracteriza a la resolución definitiva para efectos del juicio de nulidad, prevista en el artículo 14 de la ley orgánica mencionada.

Sirve de orientación a lo anterior, la tesis 2a. X/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza:

---

[6] Instituto de Investigaciones Jurídicas, *Diccionario Jurídico Mexicano*, tomo P-Z, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, página 2821.
[7] Raúl Rodríguez Lobato, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Revista Jurídica, Biblioteca Jurídica Virtual: *www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/100/art.7.htm*

"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.—La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan 'resoluciones definitivas', y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de 'resoluciones definitivas' las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados."[8]

Ahora, el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que dispone la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y el numeral 14, en sus fracciones I, II, III y IV, señalan que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas en que se determine la existencia de una obligación fiscal,

[8] Página 336 del Tomo XVII, febrero de 2003, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*.

se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, y que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.

Luego, conforme a los anteriores preceptos legales, para la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, se infieren dos supuestos legales:

1. Que se trate de resoluciones definitivas, que determinen:

a) La existencia de una obligación fiscal;

b) Que la fije en cantidad líquida;

c) Den las bases para su liquidación;

d) Las que nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido por el Estado, y cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales;

e) Las que impongan multas por infracción a normas administrativas federales; y,

2. Las que causen un agravio fiscal al contribuyente, distinto al que se refieren los supuestos anteriores.

Del texto de los preceptos legales citados se advierte que la Sala Fiscal tiene atribuciones para conocer y resolver controversias suscitadas en materia administrativa; sin embargo, esa facultad se limita a los casos en que la resolución cuya nulidad se demande sea definitiva, y se ubiquen en las hipótesis que se precisan en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Así, para considerar una resolución como definitiva, es dable atender a su naturaleza jurídica, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, en tanto contenga una determinación o decisión cuyas características impidan modificaciones, y que ocasionen agravios en materia fiscal a los gobernados.

Entonces, como se precisó, en los actos reclamados en los juicio de nulidad, que culminaron con las sentencias reclamadas en los juicios de amparo directo, dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, no se determinó la existencia de alguna obligación fiscal, ni se constriñó a la contribuyente para que corrigiera alguna irregularidad, puesto que no se le

obligó a pagar alguna cantidad, así como tampoco se le obligó a que presentara una declaración en determinado sentido.

Por tanto, tales actos no son resoluciones definitivas de las comprendidas dentro de las tres primeras fracciones del numeral 14 de la ley en comento, para efectos del conocimiento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vía juicio de nulidad, porque en ellos no se determinó la existencia de una obligación fiscal, ni se fijó en cantidad líquida, ni se dieron las bases para su liquidación; tampoco niegan la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; ni imponen multas por infracción a las normas administrativas fiscales.

De igual manera, no se ubican dentro del supuesto de la fracción IV del propio precepto, es decir, que causen un agravio en materia fiscal diferente a las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del citado numeral y que quedaron señaladas; ya que en relación con lo que debe entenderse por "materia fiscal", la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que se trata de todo aquello relacionado con la recaudación de impuestos o de multas o sanciones por infracciones a las leyes tributarias, tal como se advierte de las tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen:

"MATERIA FISCAL. SIGNIFICACIÓN.—Por materia fiscal debe entenderse lo relativo a la determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exención, la prescripción o el control de los créditos fiscales, o lo referente a las sanciones que se impongan con motivo de haberse infringido las leyes tributarias."[9]

"MATERIA FISCAL, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR.—Por materia fiscal debe entenderse todo lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas con motivo de la infracción a las leyes que determinan dichos impuestos."[10]

Ahora, la expresión "*causar un agravio en materia fiscal diferente a las hipótesis anteriormente señaladas*" que utiliza el legislador en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hace referencia a los casos diversos a los que menciona en las tres primeras fracciones de ese numeral; es decir, a los casos distintos a aquellos

[9] Séptima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, Volumen 69, Tercera Parte, página 51.
[10] Quinta Época, *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* de 1917-1995, Tomo III, Parte HO, tesis 1169, página 923.

en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco (*los que ya se precisaron*); entonces, debe concluirse, que cuando el legislador dispone la procedencia del juicio de nulidad con motivo del referido agravio, se está refiriendo a una afectación derivada o relacionada con el cumplimiento a las leyes fiscales, lo cual, no ocurre en la especie.

Así, la respuesta a la solicitud de suspensión de actividades solicitada por una persona moral, no genera un perjuicio al particular traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, ya que del contenido de dicha comunicación se desprende que sólo le propone algunas alternativas a la contribuyente para regularizar su situación fiscal; de ahí que, en tales actos no se determina obligación fiscal alguna, por lo cual, debe considerarse que esos documentos, verdaderamente constituye sólo una orientación jurídica, que no trascienden a la esfera jurídica de la contribuyente para causarle algún perjuicio, por lo que no se trata de una resolución definitiva impugnable en el juicio de nulidad.

Por ello, esa respuesta no es vinculatoria para el contribuyente, tampoco trasciende ni modifica su situación tributaria, sino que se trata de un acto, el cual podría, en todo caso, constituir una fase dentro de un procedimiento administrativo, pero de ninguna manera le pone fin, pues no reúne las características de un acto definitivo.

Ciertamente, la autoridad administrativa no determinó una obligación a cargo de la contribuyente, ni le resuelve en definitiva su situación frente a la solicitud de suspensión de actividades, pues sólo le hace saber que las personas morales no pueden presentar ese aviso, al no existir disposición legal o reglamentaria que contemple un procedimiento para que las personas morales presenten aviso de suspensión de actividades y por consiguiente, en términos de la legislación mercantil la sociedad deberá ser disuelta y liquidar su activo a fin de presentar el "*aviso de cancelación al Registro Federal de Contribuyentes por liquidación de total del activo*", y así, darse de baja de dicho registro.

En resumen, dicha respuesta sólo constituye un criterio orientador en términos del artículo 33, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, el cual dispone:

"**Artículo 33.** Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

"I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:

"a) Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes."

Por consiguiente, esa orientación no tiene el elemento de definitividad indispensable para su impugnación dentro del juicio de nulidad, ya que se trata de una solicitud de cambio de estatus fiscal, esto es, que con motivo de la interrupción de actividades de la contribuyente, le era necesario se le colocara en "suspensión de actividades" ante el Registro Federal de Contribuyentes, atendiendo a los derechos y obligaciones en que se encontraba.

Por ende, los actos en análisis no le causan a la contribuyente un perjuicio inminente y directo en su esfera jurídica y patrimonial, al no contener en sí una obligación fiscal impuesta por una autoridad, sino sólo una orientación jurídica fiscal; de modo que, en su contra, no procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por tanto, la resolución es definitiva hasta que nace el derecho a impugnarla, esto es, cuando la autoridad aplique los criterios relativos a una resolución definitiva, como lo sostuvo uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; en esas condiciones, se concluye que la respuesta de la autoridad a la mencionada solicitud de la contribuyente, no constituye una resolución definitiva y, por ende, no es impugnable mediante el juicio de nulidad, atento a lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En estas condiciones, este Pleno del Decimotercer Circuito considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que a continuación se emite:

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. La respuesta de la autoridad tributaria a la solicitud de una persona moral para que se le coloque en "suspensión de actividades" ante el Registro Federal de Contribuyentes, no constituye una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio de nulidad, porque no es vinculatoria para el contribuyente, ni trasciende o modifica su estatus tributario, sino que más bien se trata de un acto que podría, en todo caso, constituir una fase dentro de un procedimiento administrativo, pero que de ninguna manera le pone fin, pues no reúne las

características de un acto definitivo, ya que no determina una obligación a cargo de la contribuyente, ni resuelve en definitiva su situación respecto a la solicitud de suspensión de actividades, porque sólo se informa que las personas morales no pueden presentar el aviso, de suspensión de actividades, al no existir disposición legal o reglamentaria que contemple un procedimiento para tal efecto. Por tanto, dicha respuesta no se ubica dentro del supuesto previsto en el artículo 14, en su fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, es improcedente impugnarla en el referido juicio de nulidad.

Lo resuelto no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los cuales se dictaron las ejecutorias materia de la contradicción de criterios, por así ordenarlo el artículo 226, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado; se, resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por este Pleno del Decimotercer Circuito, residente en esta ciudad, por mayoría de dos votos.

TERCERO.—Dése publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en esta resolución, en los términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; remítase la tesis de jurisprudencia a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos establecidos en el artículo 219 de la Ley de Amparo; así como a los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en esta resolución para los efectos legales correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de dos votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Pleno del Decimotercer Circuito, Jorge Valencia Méndez (presidente) y Rodolfo Alberto Bandala Ávila, contra el voto particular de la Magistrada María de Fátima Isabel Sámano Hernández, quien manifestó disentir del criterio mayoritario por las siguientes razones.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información con-

siderada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular que formula la Magistrada María de Fátima Isabel Sámano Hernández, en la contradicción de tesis 1/2014.

"De acuerdo con lo consensado con mis compañeros de tribunal, me permito formular voto particular en la presente contradicción de tesis (1/2014), difiriendo respetuosamente del criterio de la mayoría, por las siguientes razones:

"Los oficios impugnados ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ambos juicios de nulidad, de los que derivan las sentencias reclamadas en los juicios de amparo 58/2014 y 252/2014, ahora contendientes, contienen la respuesta que la Administración Local de Servicios al Contribuyente, emitió a la solicitud, que en similares términos presentaron las empresas actoras para que se cambiara su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes y se les tuviera en suspensión de actividades.

"Ahora bien, de los términos en que fueron emitidas tales respuestas, se colige que sí constituyen una resolución definitiva en términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dispone:

"'**Artículo 14.** El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

"'I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

"'II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

"'III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

"'IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

"'V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"'Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la

Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

"'VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

"'VII. Las que se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal;

"'VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

"'IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales;

"'X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

"'XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

"'XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

"'XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

"'XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

"'No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

"'XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y

"'XVI. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.

"'Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

"'El tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

"'El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.'

"En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 79/2002-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el concepto de 'resolución definitiva' a que se refiere el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa –que coincide con la redacción actual del primer párrafo del artículo 14 de la ley orgánica de dicho tribunal, en vigor– determinó que para lograr una adecuada intelección de ese concepto, se debe considerar la naturaleza jurídica de la resolución (sea expresa o ficta), la cual debe constituir el producto final o última voluntad de la administración que se puede expresar de dos formas: a) como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o b) como una manifestación aislada que, por su naturaleza o características, no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar esa última voluntad o voluntad definitiva. El criterio en cuestión, se sustentó en las consideraciones que se transcriben y que al caso interesan:

"'SEXTO.— …

"'En adición a lo anterior, resulta conveniente precisar también qué se entiende por «resolución definitiva» para efectos del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"'A pesar de que el numeral 11 antes mencionado precisa qué se debe entender por resolución definitiva al establecer que tendrán tal carácter las resoluciones que no admitan recurso o admitiéndolo se trate de recursos optativos, esta Segunda Sala considera que es contra derecho determinar el alcance de lo que es una «resolución definitiva» para efectos del juicio contencioso-administrativo federal, solamente con base en la expresión del texto normativo, y para lograr una adecuada intelección del concepto se estima necesario tener presente lo que a continuación se detallará.

"'La definitividad para efectos del juicio contencioso-administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o b) Como manifestación aislada que, por su naturaleza y características no requiere de procedimientos

que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. Así, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza iter procedimental no podrán considerarse «resoluciones definitivas», en obvio que éste sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento, excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido tal como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que para este caso es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva, cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos.

"'No se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente y solamente cuando la resolución de que se trata adquiere esa fijeza que impide reformas o mudanzas, se dice que «causa estado».

"'La generación de esta situación últimamente mencionada en combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo, además de lo que prevé el artículo 11 de la ley orgánica antes mencionada, lo que dará lugar al nacimiento del interés requerido para acudir a la vía en comentario.'

"De la ejecutoria aludida, derivó la tesis 2a. X/2003, cuyos texto y datos de localización, son los siguientes:

"'Novena Época
"'Registro: 184733
"'Instancia: Segunda Sala
"'Tipo de tesis: aislada
"'*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'Tomo XVII, febrero de 2003
"'Materia: administrativa
"'Tesis: 2a. X/2003
"'Página: 336

"'TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.—La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan «resoluciones definitivas», y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de «resoluciones definitivas» las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la

cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.'

"Partiendo del criterio plasmado en la tesis en mención, se infiere que las resoluciones impugnadas en los juicios de nulidad, sí son definitivas, pues, por una parte, como los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hemos coincidido, no son la respuesta a una consulta fiscal, pero sí constituyen el producto final, o última voluntad, de la administración local de servicios al contribuyente, en relación a la petición (solicitud) que las empresas accionantes les formularon, para que cambiara su situación fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes y se les tuviera en suspensión de actividades; pues la autoridad fiscal –aunque motu proprio, en el oficio aludido, cambió la naturaleza de la solicitud de las contribuyentes, y le dio tratamiento como si fuera una consulta fiscal–, da una respuesta que no es favorable a los intereses de las accionantes, esto es, le da las razones por las cuales, a su juicio, no es posible que las personas morales presenten ante las autoridades fiscales, un aviso de suspensión de actividades, en virtud de que, dice la autoridad, '*las disposiciones fiscales vigentes no contemplan la posibilidad de que las personas morales puedan presentar aviso de suspensión de actividades*', razón por la cual, le dijo, que esa autoridad **se encontraba impedida** para hacerlo.

"De lo anterior es factible colegir que la respuesta en cuestión, sí constituye la última voluntad de la autoridad fiscal en el trámite relacionado con la solicitud que en concreto le planteó la contribuyente, ahora quejosa, de ahí que, considero, sí constituye una resolución definitiva que puede ser impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la medida, que las resoluciones, cuya nulidad pretenden los accionantes, mediante las cuales la autoridad da las razones por las que no procede el trámite intentado por las contribuyentes, esto es, que dichas personas morales presenten ante las autoridades fiscales, un aviso de suspensión de actividades, les causa un agravio en materia fiscal, diferente a las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del propio artículo 14.

"En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 196/2006-SS, en ejecutoria publicada en la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXV, abril de 2007, página 676, interpretó el concepto 'agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores', y en lo de interés, sostuvo:

"'El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala que el referido tribunal conocerá de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas como lo son, entre otras, las siguientes:

"'I. Las que determinen la existencia de una obligación fiscal en cantidad líquida;

"'II. Las que nieguen la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales;

"'III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas fiscales;

"'IV. Las que causen un agravio en materia fiscal diferente a las hipótesis anteriormente señaladas.

"'En relación con lo que debe entenderse por «materia fiscal», la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que se trata de todo aquello relacionado con la recaudación de impuestos o de multas o sanciones por infracciones a las leyes tributarias, tal y como se advierte de las tesis de rubros, textos y datos de publicación, siguientes:

"'«MATERIA FISCAL. SIGNIFICACIÓN.—Por materia fiscal debe entenderse lo relativo a la determinación, la liquidación, el pago, la devolución, la exención, la prescripción o el control de los créditos fiscales, o lo referente a las sanciones que se impongan con motivo de haberse infringido las leyes tributarias.» (Séptima Época, Segunda Sala, *Semanario Judicial de la Federación,* Tomo 69, Tercera Parte, página 51)

"'«MATERIA FISCAL, QUE DEBE ENTENDERSE POR.—Por materia fiscal debe entenderse todo lo relativo a impuestos o sanciones aplicadas con motivo de la infracción a las leyes que determinan dichos impuestos.» (Quinta Época, Segunda Sala, *Apéndice* de 1995, Tomo III, Parte HO, tesis 1169, página 923)

"'En relación con el tema, se tiene presente que al analizar algunas de las reglas para la formación o creación de leyes, específicamente, en relación con las previstas en el artículo 73, inciso H), de la Constitución General de la República, en el sentido de que, para la formación de leyes o decretos que versaren, entre otras materias, sobre contribuciones o impuestos deberán discutirse en primer término en la Cámara de Diputados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que si el proyecto de ley o decreto se vincula con contribuciones o impuestos, sea en su aspecto material, accesorio o formal, debe cumplirse invariablemente con aquel requisito; es decir, determinó que en torno al tema, debe considerarse todo lo que se relaciona con dichas contribuciones.

"'Dicha jurisprudencia, tiene el rubro, texto y datos de publicación, que enseguida se señalan:

"'«CONTRIBUCIONES. EL REQUISITO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 72, INCISO H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL SENTIDO DE QUE LOS PROYECTOS DE LEY O DECRETO QUE VERSEN SOBRE LA MATERIA RELATIVA SE DISCUTAN PRIMERO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ABARCA CUALQUIER ASPECTO MATERIAL, ACCESORIO O FORMAL QUE SE VINCULE CON AQUÉLLOS.—El indicado precepto constitucional establece un requisito de orden para la validez del proceso legislativo, consistente en que en la formación de leyes o

decretos que versen, entre otras materias, sobre contribuciones, las iniciativas primero se discutan en la Cámara de Diputados. En ese tenor, se concluye que si el proyecto de ley o decreto se vincula con contribuciones o impuestos, sea en su aspecto material, accesorio o formal, debe cumplirse invariablemente con aquel requisito, en virtud de que ni del texto del señalado artículo 72, inciso h), ni de sus antecedentes legislativos se evidencia que sólo deba colmarse cuando se trate de contribuciones nuevas o de modificaciones a sus elementos esenciales.» (Novena Época, Pleno, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, marzo de 2006, tesis P./J. 44/2006, página 6)

"'Este criterio lo reitera el Tribunal Pleno, al resolver los asuntos que dieron origen a la diversa jurisprudencia P./J. 78/2006 (publicada en la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIII, junio de 2006, página 7), de rubro: «VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.»

"'Los asuntos a los que se hace referencia en el párrafo precedente, se resolvieron por mayoría de ocho votos en sesión pública del veintiséis de enero de dos mil seis y son los amparos en revisión 1223/2005, 1445/2005, 1454/2005, 1468/2005, 1513/2005, 1516/2005, 1524/2005, 1555/2005 y 1696/2005 promovidos, respectivamente, por **********, S.C. y coagraviada; **********, S.A. de C.V.; **********, S.A. de C.V.; Operes, S.A. de C.V.; **********, S.A. de C.V.; Carreteras de Cuota Puebla; ********** S.A. de C.V.; **********, S.A. de C.V.; todos contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación de los artículos 4o., 4o.-A, 4o.-B y 4o.-C, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

"'En dicha sesión, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó, entre otros temas, el relativo a lo que debe entenderse «en materia de contribuciones» a que se refiere el inciso H) del artículo 73 de la Constitución General de la República; y determinó que dentro del tema, no han de considerarse solamente aquellos proyectos de ley o decreto en los que se proponen modificaciones a los elementos esenciales de los impuestos, sino que también deben incluirse, aquellas propuestas de ley o decreto que versan sobre todos los temas relacionados o vinculados estrechamente con la materia de estudio, tal y como se advierte de las siguientes consideraciones:

"'«La reforma de esta ley no transgrede el artículo 72, apartado H, de la Constitución Federal, porque lo dispuesto en la norma constitucional no se encuentra acotado sólo a la creación de un tributo, sino que incluye todo aquello que se refiera a una norma fiscal, vinculada con contribuciones. Es decir … el artículo 72, apartado H, no se encuentra acotado solamente a la creación del tributo o a la modificación de sus elementos esenciales, sino que incluye todo aquello que se refiera a una norma fiscal vinculada con contribuciones … se hace una interpretación extensiva, para decir que lo dispuesto en esta fracción del artículo 72, es aplicable a todo aquello que se refiera a una norma fiscal, vinculada con contribuciones. … debemos entender que toda iniciativa de ley en materia fiscal, debe ir primero a la Cámara de Diputados,

puede entenderse esto de manera muy amplia. … aquella vieja tesis de la Corte, que definía la materia fiscal, exclusivamente como las disposiciones legales que se refieren a impuestos, así quedaba acotado el contenido de la materia fiscal. … es conveniente que la Suprema Corte, precise que no use en esta decisión, algo que puede ser todavía sujeto de discusión y de interpretación en otro sentido. … el artículo 72 está señalando que cuando se trate de empréstitos, contribuciones o impuestos; si se trata precisamente de una iniciativa que se está refiriendo al establecimiento de contribuciones o impuestos, independientemente de que se trate de modificaciones, reformas o adiciones, en cualquiera de los aspectos a que el impuesto se refiera, sea un tributo esencial o sea una variable, de todas maneras está comprendida dentro de la fracción y del inciso h) del artículo 72 constitucional …»

"'En este sentido, se tiene también presente, el contenido de la tesis aislada número 2a. XI/2003, de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 324 del Tomo XVII, febrero de 2003, de la Novena Época, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro: «DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.», así como de la parte considerativa de la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil tres, al resolver la diversa contradicción de tesis 79/2002-SS, de la que deriva dicha tesis, que, en la parte conducente, son del siguiente tenor literal:

"'«DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—El requerimiento de información y/o documentos que formula el fisco federal al Contador Público autorizado que dictaminó los estados financieros, con copia al contribuyente, en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, constituye una resolución definitiva respecto de la cual, si se pretende su nulidad, es necesario entablar en su contra juicio contencioso administrativo de manera destacada, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es decir, reclamando expresamente y por separado el aludido requerimiento, como <resolución impugnada>. Ello es así, pues debe tomarse en consideración que el citado requerimiento consiste en un acto administrativo aislado que contiene una resolución definitiva que genera agravios objetivos tanto al contador público dictaminador como al contribuyente, ya que a través de ella se impone al profesional contable la obligación fiscal de cumplir irrestrictamente con la entrega de lo que le fue solicitado, lo cual, además de poner en duda su labor como profesional autorizado, constituye un acto de molestia en los papeles y derechos de aquél; y para el contribuyente relacionado con el dictamen financiero, también constituye una decisión definitiva que le ocasiona un agravio genérico en materia fiscal, identificado con la fracción IV del referido artículo 11, toda vez que se cuestiona el contenido de su declaración de impuestos que, aun rendida en formato de dictamen, se presume hecha bajo protesta de decir verdad, pues tal forma de declaración goza de la presunción de certeza de su contenido, salvo prueba en contrario, de conformidad con el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.» (Novena Época, Segunda Sala, *Semanario*

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, tesis 2a. XI/2003, página 324).

"'De las anteriores transcripciones se advierte claramente que al resolver la contradicción de tesis mencionada, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el requerimiento de información y/o documentos que formula el fisco federal al contador público autorizado que dictaminó los estados financieros, con copia al contribuyente, en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, constituye una resolución definitiva que afecta tanto al contribuyente como al contador que emitió el dictamen, respecto de la cual, si se pretende su nulidad, es necesario entablar en su contra juicio contencioso administrativo de manera destacada; ya que dicha sanción se impone al profesionista señalado por el desempeño de su actividad, por parte de una autoridad dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.

"'**De lo hasta aquí expuesto, se infiere que la expresión causar un agravio en materia fiscal diferente a las hipótesis anteriormente señaladas que utiliza el legislador en el artículo 11, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hace referencia a los casos diversos a los que menciona en las tres primeras fracciones de ese numeral; es decir, a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco (por determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida; por negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas fiscales).**

"'Entonces, debe concluirse, siguiendo el criterio del Tribunal Pleno y de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando el legislador dispone la procedencia del juicio de nulidad con motivo de un 'agravio en materia fiscal diferente a las hipótesis señaladas', se está refiriendo a una afectación derivada o relacionada con el cumplimiento a las leyes fiscales, como en el caso acontece; es decir, cuando la autoridad hacendaria sanciona al contador público autorizado para dictaminar estados financieros, con motivo de su actividad, por la infracción a leyes fiscales.

"'No es óbice a la anterior conclusión, la circunstancia relativa a que la suspensión del registro del contador público de la que se habla, sea posterior al proceso fiscalizador (el que inicia con el requerimiento de información y culmina con la conclusión de la visita o revisión de gabinete, en términos de lo dispuesto, entre otros, por los artículos 42, 46-A y 48 del Código Fiscal de la Federación) ya que, precisamente se considera que se ocasiona a dicho profesionista, un «agravio en materia fiscal», en los términos previstos en la fracción IV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque esa sanción tiene su origen en el ejercicio de la facultad fiscalizadora de la autoridad, lo que se corrobora si se tiene en cuenta que lo que la citada resolución está calificando, es la específica actividad regulada del contador, consistente en el dictamen de estados financieros para efectos fiscales; actividad la cual, se reitera, se encuentra relacionada directamente con la causación, pago o cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente dictaminado. …'

"De lo anterior se advierte, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el concepto 'agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores' –que se reproduce actualmente en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa– en el sentido de que alude a una afectación derivada o relacionada con el cumplimiento a las leyes fiscales, así como a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida; por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales.

"Ahora bien, el caso en estudio se ubica en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de que si bien es cierto, en las resoluciones, cuya nulidad pretenden las personas morales actoras, la Administración Local de Servicios al Contribuyente, no determinó la existencia de una obligación fiscal, no la fijó en cantidad líquida, ni dio las bases para su liquidación (fracción I), tampoco negó la devolución de un ingreso (fracción II), ni impuso una multa (fracción III); **no menos verídico resulta**, que la respuesta contenida en dichas resoluciones, en el sentido de que es improcedente la solicitud de las actoras de presentar aviso de suspensión de actividades, **les genera un agravio en materia fiscal** (distinto a los anteriormente enunciados), pues afecta la esfera jurídica de dichas contribuyentes, en relación con el cumplimiento a las leyes fiscales, ya que se vincula directamente con la causación y pago de las obligaciones fiscales de las empresas actoras, en la medida que en términos del artículo 26, fracción IV, inciso a), del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, la presentación del aviso de suspensión de actividades, por regla general, libera al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante dicha suspensión, excepto tratándose de los supuestos previstos en dicho precepto (por ejemplo, declaraciones del ejercicio en que interrumpa sus actividades y cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes a periodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión).

"En ese contexto, las resoluciones impugnadas en los juicios de nulidad, sí son definitivas, ya que como se ha explicado, constituyen la última voluntad de la autoridad fiscal en el trámite relacionado con la solicitud que en concreto le plantearon las contribuyentes, ahora quejosas y, que por ende, pueden ser impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la medida, que les causa un agravio en materia fiscal, diferente a las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del propio artículo 14."

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. La respuesta de la autoridad tributaria a la solicitud de una persona moral para que se le coloque en "suspensión de actividades" ante el Registro Federal de Contribuyentes, no constituye una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio de nulidad, porque no es vinculatoria para el contribuyente, ni trasciende o modifica su estatus tributario, sino que más bien se trata de un acto que podría, en todo caso, constituir una fase dentro de un procedimiento administrativo, pero que de ninguna manera le pone fin, pues no reúne las características de un acto definitivo, ya que no determina una obligación a cargo de la contribuyente, ni resuelve en definitiva su situación respecto a la solicitud de suspensión de actividades, porque sólo se informa que las personas morales no pueden presentar el aviso, de suspensión de actividades, al no existir disposición legal o reglamentaria que contemple un procedimiento para tal efecto. Por tanto, dicha respuesta no se ubica dentro del supuesto previsto en el artículo 14, en su fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, por ende, es improcedente impugnarla en el referido juicio de nulidad.

PLENO DEL DECIMOTERCER CIRCUITO.
PC.XIII. J/2 A (10a.)

Contradicción de tesis 1/2014. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Tercer Circuito. 18 de febrero de 2015. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Valencia Méndez y Rodolfo Alberto Bandala Ávila. Disidente: María de Fátima Isabel Sámano Hernández. Ponente: Rodolfo Alberto Bandala Ávila. Secretario: David Jesús Velasco Santiago.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 58/2014, y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 252/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 28 DE OCTUBRE DE 2014. PONENTE: LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ. SECRETARIA: CLAUDIA ELENA HURTADO DE MENDOZA GODÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 10 y 49 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y de acuerdo a lo establecido en el oficio SECJACNO/CNO/1255/2014, emitido por el secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis,[6] en materia administrativa, sustentadas por tres Tribunales Colegiados de este circuito.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

[6] Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

El artículo 227, fracción III,[7] de la ley de la materia, establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226,[8] podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis la formula el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, por lo que, es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 74/2013 (10a.),[9] de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—Los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de un mismo circuito y, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización. Sin embargo, atento al principio de seguridad jurídica que pretende regularse a través de esa disposición constitucional y a que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se concluye que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar ante este Alto Tribunal contradicciones de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de un mismo circuito."

---

[7] "**Artículo 227.** La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

[8] "**Artículo 226.** Las contradicciones de tesis serán resueltas por: … III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente"

[9] Décima Época. Registro digital: 2003518. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, materia común, tesis 2a./J. 74/2013 (10a.), página 609.

TERCERO.—El **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito**, al resolver el **recurso de queja 63/2014**, en sesión de seis de mayo de dos mil catorce, consideró lo siguiente:

"SÉPTIMO.—Estudio de los agravios. Los argumentos señalados en una parte del agravio tercero son fundados y suficientes para revocar el auto impugnado.

"Señala que el sustento legal para que se proceda a la admisión de la demanda está inmerso en los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal, al ser los actos reclamados violatorios del artículo 134 constitucional, al no garantizar los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que prevé la norma constitucional.

"Por otra parte argumenta que se debe admitir la demanda de amparo de conformidad con el contenido de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, de acuerdo a lo narrado en la demanda y que hicieron físicamente imposible que la quejosa contendiera libremente y en igualdad de circunstancias en la licitación.

"Los motivos de agravio son en esencia fundados.

"En el caso, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías, al considerar configurada de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXXIII (sic), en relación con el 107, fracción III, inciso a), ambos de la referida ley de la materia.

"Lo anterior, al considerar que al ser las resoluciones impugnadas actos dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, su impugnación debe necesariamente hacerse hasta la resolución final o definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto las violaciones de fondo como de procedimiento, lo que tiende a armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales.

"Los artículos 61, fracción XXXIII (sic), y 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en los que el a quo sustentó su determinación, establecen:

"'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"'...

"'XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.'

"'Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"'...

"'III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

"'a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución.'

"Ahora los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal establecen lo siguiente:

"'Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

"'I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.'

"'Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"'IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances

que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

"'No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución.'

"Por su parte la Ley de Amparo en su nuevo marco normativo, señala en los artículos 1o., 5o., fracción I, 107, fracción III, inciso b) y 117 lo siguiente:

"'Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"'I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

"'...

"'El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. ...'

"'Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"'I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.'

"'Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

"'...

"'Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. ...'

"Del contenido de dichos preceptos, y a raíz de las reformas constitucionales de seis y el diez de junio de dos mil once, se introdujeron dos aspectos importantes para la materia en estudio como son: la institución protectora de los derechos fundamentales, incluso, por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, la procedencia del juicio de amparo en contra de actos omisivos, reflejados posteriormente, en la reforma a la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril del año dos mil trece.

"En lo concerniente a los actos omisivos, el legislador federal estableció la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de esta naturaleza. Por lo que, el presente estudio necesariamente debe versar en el análisis integral con este tipo de actos en conjunción con la impugnación de los actos en los que se aducen puramente violaciones directas a la Constitución Federal, sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa, previstos en la legislación común, ni esperar a la resolución final del procedimiento.

"Además que de los preceptos constitucionales y legales transcritos, se advierte que, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y

sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"Empero, contiene como excepción a la regla general, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.

"Cierto, en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Federal, se alude a que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, entre otras hipótesis.

"Del contenido de la demanda de garantías, origen del presente recurso, se advierte que la empresa quejosa se dolió de una violación directa a la Constitución, como lo fue la ausencia total de fundamentación y motivación, y más concretamente de una ausencia de fundamentación en la competencia de la autoridad que emitió los resúmenes de las convocatorias de licitación.

"Para efectos del presente estudio, y dado que en la demanda de amparo formulada por la parte quejosa, y que se encuentra agregada al expediente remitido por el Juez de Distrito en conjunción con el presente recurso de queja, se encuentran glosadas únicamente las fojas nones de la demanda, es decir, no se contienen las fojas pares, tal y como se aprecia de las fojas catorce a veintidós del expediente de la presente queja, y que, como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se trae a la vista el contenido de la demanda de amparo origen del presente juicio de amparo, citado y digitalizado en la ejecutoria pronunciada en el diverso recurso de queja 14/2014, fallada en sesión plenaria de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, el cual es del siguiente contenido:

EN MONTERREY, N. L.

QUEJOSA: [redacted]

AMPARO INDIRECTO

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO

[redacted] m
mayores de edad, con domicilio para oír notificaciones en la calle [redacted]
[redacted] en Monterrey, Nuevo León; a
en los más amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al
Derecho [redacted], con cédula profesional número
cédula de Doctor en Derecho número [redacted], a los Licenciados er
[redacted], con cédula profesional número [redacted]
[redacted] con cédula profesional número [redacted]
[redacted]
cédula profesional 7008760; ante Usted, con respeto compare
exponemos:

Somos apoderados de la persona moral denominada [redacted]
[redacted] lo que acreditamos con la escritura pública núm
otorgada ante la fe del Licenciado [redacted] Titular de
Pública número 109 en el Estado de Nuevo León.

Con tal carácter, acudimos ante su Señoría, a fin de promov
INDIRECTO DE GARANTÍAS y para ello, damos cabal cumplimie
exigencias contenidas en el numeral 108 de la Ley Reglamentaria de lo
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos M
manifestando para ello lo siguiente:

I.- QUEJOSA: Nuestra representada con el domicilio indic
proemio.

II.- TERCERO INTERESADO: Se desconocen, ya que la única c
aptitud de saberlo es la autoridad responsable.

III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:

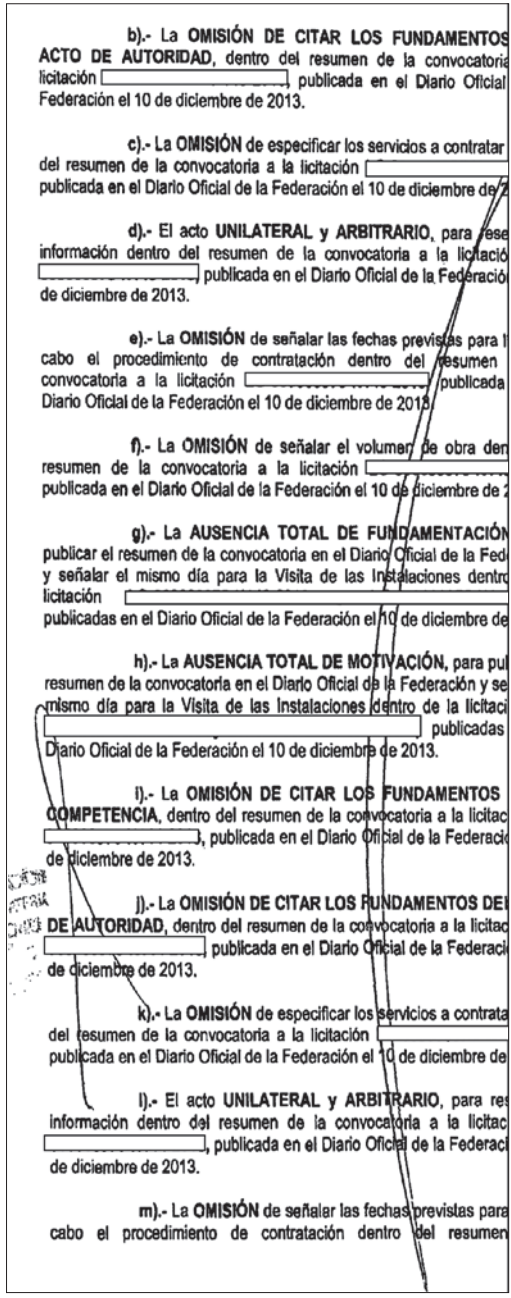
ORDENADORAS Y EJECUTORAS:

1.- Director General del Centro de la Secretaría de Comun
Transportes del Estado de Nuevo León.

2.- Sub-director de Obras del Centro de la Sec
Comunicaciones y Transportes del Estado de Nuevo León.

IV.- ACTOS RECLAMADOS:

a).- La OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENT
COMPETENCIA, dentro del resumen de la convocatoria a la lic
[redacted] publicada en el Diario Oficial de la Fede
de diciembre de 2013.



b).- La **OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS ACTO DE AUTORIDAD**, dentro del resumen de la convocatoria licitación [redacted], publicada en el Diario Oficial Federación el 10 de diciembre de 2013.

c).- La **OMISIÓN** de especificar los servicios a contratar del resumen de la convocatoria a la licitación [redacted] publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de

d).- El acto **UNILATERAL y ARBITRARIO**, para rese información dentro del resumen de la convocatoria a la licitació [redacted], publicada en el Diario Oficial de la Federació de diciembre de 2013.

e).- La **OMISIÓN** de señalar las fechas previstas para l cabo el procedimiento de contratación dentro del resumen convocatoria a la licitación [redacted] publicada Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013

f).- La **OMISIÓN** de señalar el volumen de obra den resumen de la convocatoria a la licitación [redacted] publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de

g).- La **AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN** publicar el resumen de la convocatoria en el Diario Oficial de la Fed y señalar el mismo día para la Visita de las Instalaciones dentro licitación [redacted] publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de

h).- La **AUSENCIA TOTAL DE MOTIVACIÓN**, para pul resumen de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y se mismo día para la Visita de las Instalaciones dentro de la licitaci [redacted] publicadas Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

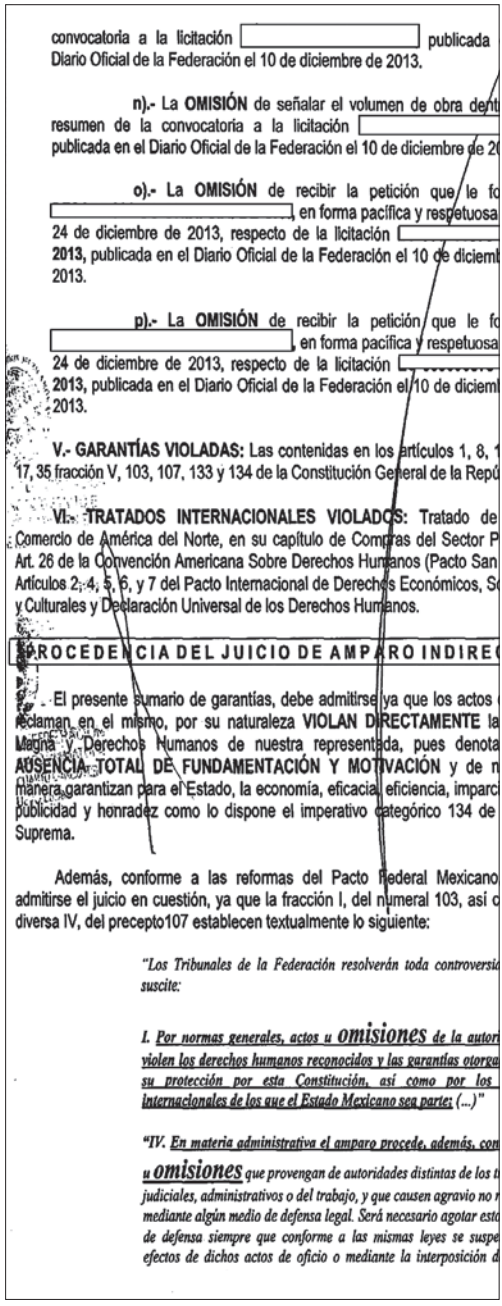
I).- La **OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS COMPETENCIA**, dentro del resumen de la convocatoria a la licitac [redacted], publicada en el Diario Oficial de la Federaci de diciembre de 2013.

j).- La **OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS DE DE AUTORIDAD**, dentro del resumen de la convocatoria a la licitac [redacted], publicada en el Diario Oficial de la Federaci de diciembre de 2013.

k).- La **OMISIÓN** de especificar los servicios a contrata del resumen de la convocatoria a la licitación [redacted] publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de

l).- El acto **UNILATERAL y ARBITRARIO**, para re información dentro del resumen de la convocatoria a la licitac [redacted], publicada en el Diario Oficial de la Federaci de diciembre de 2013.

m).- La **OMISIÓN** de señalar las fechas previstas para cabo el procedimiento de contratación dentro del resumen



convocatoria a la licitación [redacted] publicada
Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

n).- La **OMISIÓN** de señalar el volumen de obra dent
resumen de la convocatoria a la licitación [redacted]
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2

o).- La OMISIÓN de recibir la petición que le fo
[redacted], en forma pacífica y respetuosa
24 de diciembre de 2013, respecto de la licitación [redacted]
2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciem
2013.

p).- La OMISIÓN de recibir la petición que le fo
[redacted], en forma pacífica y respetuosa
24 de diciembre de 2013, respecto de la licitación [redacted]
2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciem
2013.

V.- GARANTÍAS VIOLADAS: Las contenidas en los artículos 1, 8, 1
17, 35 fracción V, 103, 107, 133 y 134 de la Constitución General de la Repú

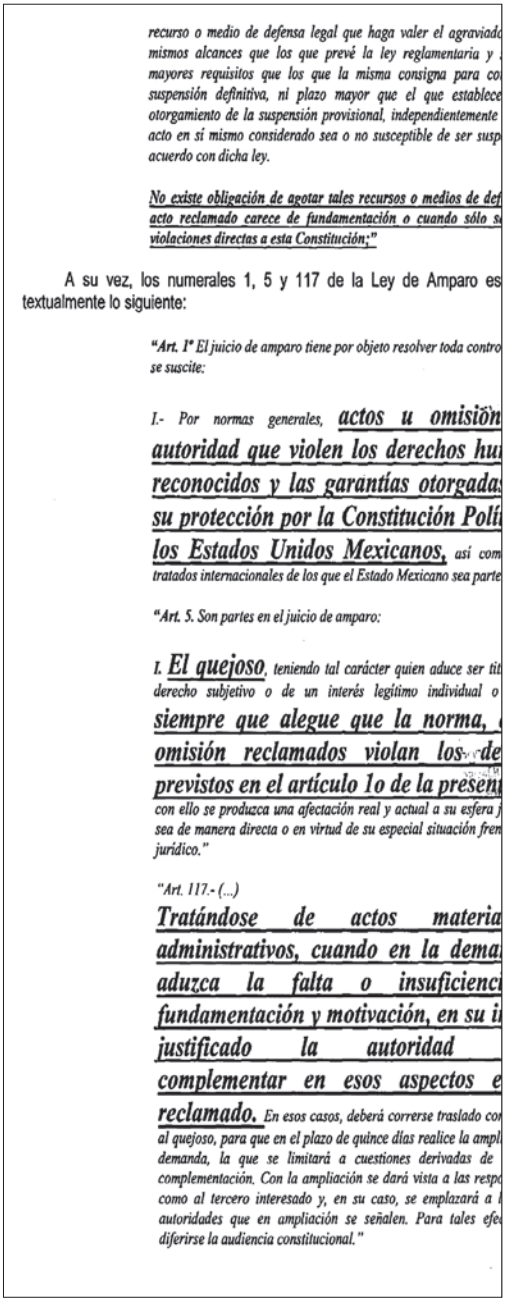
VI.- TRATADOS INTERNACIONALES VIOLADOS: Tratado de
Comercio de América del Norte, en su capítulo de Compras del Sector P
Art. 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San
Artículos 2, 4, 5, 6, y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, S
y Culturales y Declaración Universal de los Derechos Humanos.

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRE

El presente sumario de garantías, debe admitirse ya que los actos
reclaman en el mismo, por su naturaleza **VIOLAN DIRECTAMENTE** la
Magna y Derechos Humanos de nuestra representada, pues denota
AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN y de n
manera garantizan para el Estado, la economía, eficacia, eficiencia, imparc
publicidad y honradez como lo dispone el imperativo categórico 134 de
Suprema.

Además, conforme a las reformas del Pacto Federal Mexicano
admitirse el juicio en cuestión, ya que la fracción I, del numeral 103, así c
diversa IV, del precepto107 establecen textualmente lo siguiente:

> *"Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia*
> *suscite:*
>
> *I. Por normas generales, actos u* ***omisiones*** *de la autor*
> *violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorga*
> *su protección por esta Constitución, así como por los*
> *Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)"*
>
> *"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, con*
> ***u omisiones*** *que provengan de autoridades distintas de los t*
> *judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no r*
> *mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar esta*
> *de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspe*
> *efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición d*



recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviad
mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y
mayores requisitos que los que la misma consigna para co
suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece
otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente
acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser susp
acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de def
acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo s
violaciones directas a esta Constitución;"

A su vez, los numerales 1, 5 y 117 de la Ley de Amparo es
textualmente lo siguiente:

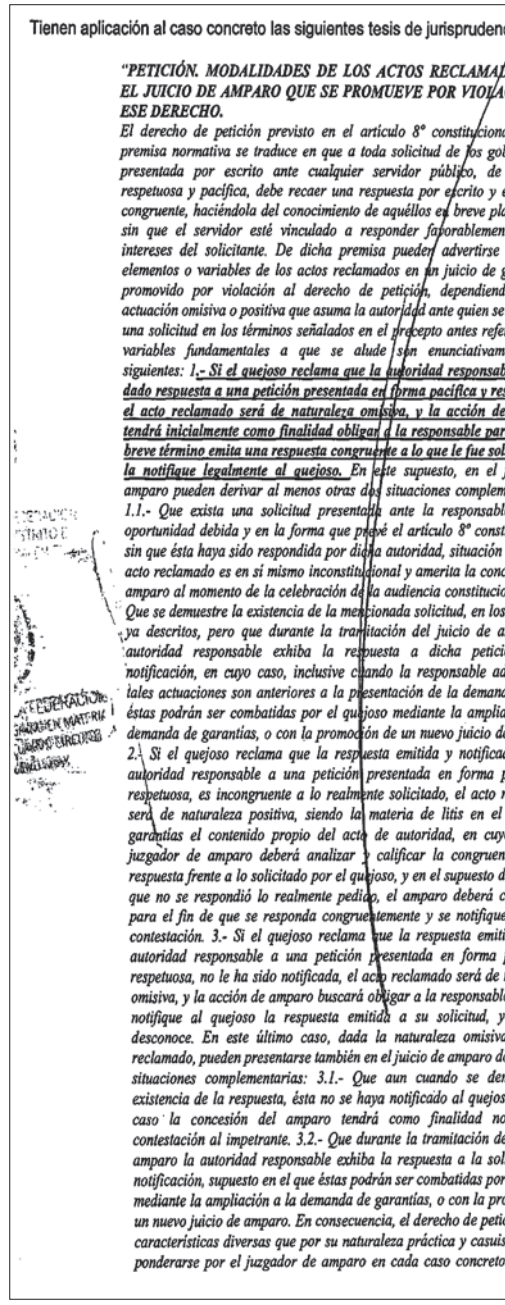
***"Art. 1º** El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda contro*
se suscite:

I.- Por normas generales, ***actos u omisión***
autoridad que violen los derechos hu
reconocidos y las garantías otorgada
su protección por la Constitución Polí
los Estados Unidos Mexicanos, *así com*
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte

***"Art. 5.** Son partes en el juicio de amparo:*

I. ***El quejoso****, teniendo tal carácter quien aduce ser tit*
derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o
siempre que alegue que la norma,
omisión reclamados violan los de
previstos en el artículo 1o de la presen
con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera j
sea de manera directa o en virtud de su especial situación fren
jurídico."

"Art. 117.- (...)
Tratándose de actos materia
administrativos, cuando en la dema
aduzca la falta o insuficienci
fundamentación y motivación, en su i
justificado la autoridad
complementar en esos aspectos e
reclamado. *En esos casos, deberá correrse traslado co*
al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampl
demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de
complementación. Con la ampliación se dará vista a las respo
como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a
autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efe
diferirse la audiencia constitucional."



Tienen aplicación al caso concreto las siguientes tesis de jurisprudenci

"PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMAD
EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLAC
ESE DERECHO.

El derecho de petición previsto en el artículo 8° constitucional premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobe presentada por escrito ante cualquier servidor público, de respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plaz sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de ga promovido por violación al derecho de petición, dependiendo actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referi variables fundamentales a que se alude son enunciativame siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsabl dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y resp el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solic la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el ju amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones compleme 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8° consti sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación e acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la conce amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucion Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de am autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petició notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable adu iales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliac demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificad autoridad responsable a una petición presentada en forma p respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto re será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el j garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruenc respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá co para el fin de que se responda congruentemente y se notifique contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitid autoridad responsable a una petición presentada en forma p respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de n omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se dem existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso caso la concesión del amparo tendrá como finalidad not contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solic notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la pro un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petici características diversas que por su naturaleza práctica y casuist ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto

promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º co
pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversa
oportunidades procesales para las partes, que influirán en
resolución del juicio, en congruencia con los principios cont
artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar
capacidad de defensa del quejoso."[1]

"CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD
CONVENCIONALIDAD. ESTÁN OBLIGADOS A EJ
TODOS LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA NACION
GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMAN

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCI
Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MA
DERECHOS HUMANOS."[3]

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. PARÁMETR
EJERCERLO EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL CONF
EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTIC
NACIÓN DICTADA EN EL EXPEDIENTE VARIOS 912/20

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. PUEDE E
RESPECTO DE CUALQUIER ACTUACIÓN U OM
ESTADO: ACTOS Y HECHOS."[5]

"LICITACIÓN PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DE SUS
REQUISITO INDISPENSABLE PARA ANALIZAR LAS
ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO."[6]

"GARANTÍAS INDIVIDUALES, VIOLACIONES DE. NO
AGOTAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS PREVIA
AMPARO."[7]

---

[1] Novena Época. Registro: 165204. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Ju
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Febrero de 201
Común. Tesis: VI.1o.A. J/49. Página: 2689.

[2] Décima Época. Registro: 159971. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2
Materia(s): Común. Tesis: XI.1o.A.T.55 K (9a.). Página: 1685.

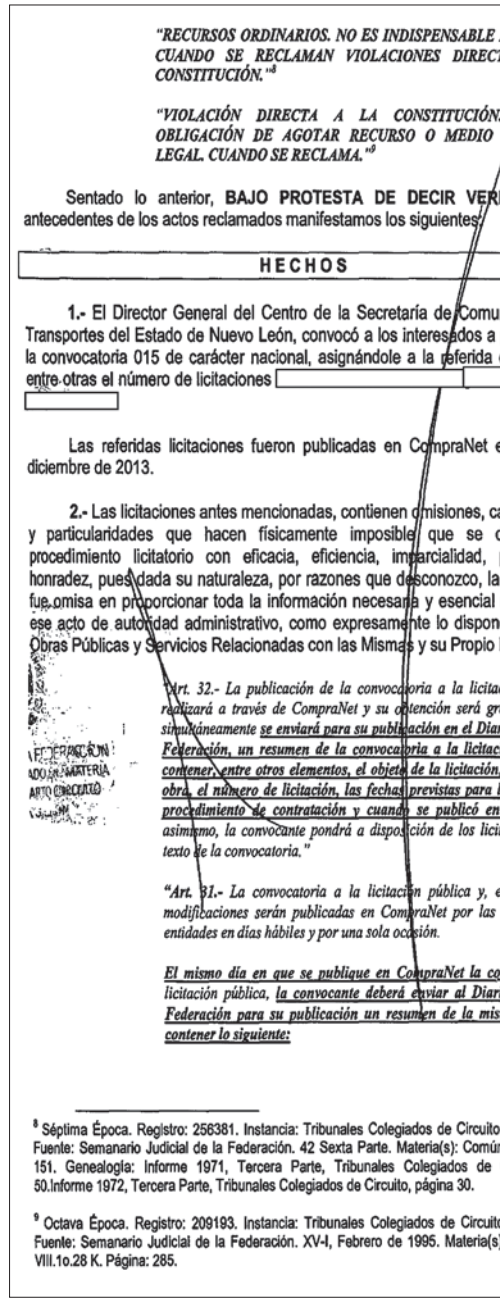
[3] Décima Época. Registro: 160525. Instancia: Pleno. Tesis Aislada. Fuente: Semanar
la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1. Materia(s): Constitu
P. LXIX/2011(9a.). Página: 552.

[4] Décima Época. Registro: 2002268. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2
Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: IV.3o.A.10 K (10a.) Página: 1303.

[5] Décima Época. Registro: 2002269. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2
Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: IV.3o.A.11 K (10a.). Página: 1305.

[6] Octava Época. Registro: 210243. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Octubre de 1994, Materia(s):
Tesis: I. 3o. A. 572 A. Página: 318.

[7] Séptima Época. Registro: 256379. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. J
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 42 Sexta Parte. Materia(s): Común.
147. Genealogía: Informe 1972, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Ci
29.Apéndice 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, Segunda Parte, tesis 675,



"RECURSOS ORDINARIOS. NO ES INDISPENSABLE A
CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTA
CONSTITUCIÓN."[8]

"VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN.
OBLIGACIÓN DE AGOTAR RECURSO O MEDIO L
LEGAL. CUANDO SE RECLAMA."[9]

Sentado lo anterior, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERD**
antecedentes de los actos reclamados manifestamos los siguientes:

HECHOS

1.- El Director General del Centro de la Secretaría de Comuni
Transportes del Estado de Nuevo León, convocó a los interesados a p
la convocatoria 015 de carácter nacional, asignándole a la referida c
entre otras el número de licitaciones

Las referidas licitaciones fueron publicadas en CompraNet el
diciembre de 2013.

2.- Las licitaciones antes mencionadas, contienen omisiones, car
y particularidades que hacen físicamente imposible que se de
procedimiento licitatorio con eficacia, eficiencia, imparcialidad, p
honradez, pues dada su naturaleza, por razones que desconozco, la r
fue omisa en proporcionar toda la información necesaria y esencial re
ese acto de autoridad administrativo, como expresamente lo disponen
Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Propio R

"Art. 32.- La publicación de la convocatoria a la licitaci
realizará a través de CompraNet y su obtención será grat
simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario
Federación, un resumen de la convocatoria a la licitació
contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación,
obra, el número de licitación, las fechas previstas para lle
procedimiento de contratación y cuando se publicó en
asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licita
texto de la convocatoria."

"Art. 31.- La convocatoria a la licitación pública y, en
modificaciones serán publicadas en CompraNet por las d
entidades en días hábiles y por una sola ocasión.

El mismo día en que se publique en CompraNet la con
licitación pública, la convocante deberá enviar al Diario
Federación para su publicación un resumen de la mism
contener lo siguiente:

[8] Séptima Época. Registro: 256381. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 42 Sexta Parte. Materia(s): Común.
151. Genealogía: Informe 1971, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de C
50.Informe 1972, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 30.

[9] Octava Época. Registro: 209193. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XV-I, Febrero de 1995. Materia(s):
VIII.1o.28 K. Página: 285.

I. El nombre de la dependencia o entidad, número y carácter licitación pública, así como la indicación de los medios que se util para su realización;

II. Una descripción sucinta del objeto de la licitación pública indi en su caso, el volumen de obra a contratar, asentando la descr general de la misma, o de los servicios a contratar, de manera identifique la magnitud de los trabajos o servicios, sin que necesario especificar los conceptos de trabajo a ejecutar;

III. La fecha, hora y lugar en que se celebrarán la visita al sitio d ejecutarán los trabajos, la primera junta de aclaraciones y el a presentación y apertura de proposiciones, y

IV. La fecha en la cual se publicó en CompraNet la convocator licitación pública. (...)"

3.- Aunado a lo anterior, la licitación antes mencionada fue dicta **AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN,** respecto del acto de autorida **AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN DE SU COMPETENCIA,** vi con ellos directamente la **CARTA MAGNA.**

Además, casualmente la autoridad responsable señaló el mismo día para llevar a cabo la Visita a las Instalaciones dentro de las licitacione

4.- Nuestra representada se in en las licitaciones quedando inscrita con los números

5.- Mi representada se apersonó a las instalaciones de la aut responsable el 24 de diciembre de 2013, e intentó presentar un escrito en pacífica y respetuosa. Sin embargo, fue atendida por una persona que se , misma que se negó a recibirle el mismo. Al cuestion motivo de su negativa, respondió que su superior de nombre Nancy Noriega le dijo que no recibiera nada relacionado con **C.V.**

6.- Como es de verse, , se enc en un completo estado de indefensión, pues actualmente desconoce por resumen a la convocatoria de las licitaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el de diciembre de 2013, no contienen todas los formalidades de eficacia, efic imparcialidad, publicidad y honradez, contempladas en el numeral 134 de Suprema.

Y asimismo, porque desconoce si la autoridad que emitió el acto recl tiene competencia y facultades para haber realizado esos actos de molestia.

7.- Las ilegales conductas desplegadas por las responsables V **DIRECTAMENTE** los Derechos Humanos y la Ley Suprema, pues denot **AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.**

Ahora bien, los hechos narrados en párrafos anteriores, demu claramente los siguientes:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

PRIMERO.- Los actos reclamados a las responsables en los incis
h) y j) del capítulo de actos reclamados, **VIOLENTA DIRECTAMENTE** e
de Libre Comercio de América del Norte, en su capítulo de Compras d
Público, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y C
Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José) y De
Universal de los Derechos Humanos, así como las garantías inc
contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 103, 107, 133 y 134 de la Co
General de la República, pues denota una **AUSENCIA TO
FUNDAMENTACIÓN,** ya que las autoridades fueron **OMISAS** en C
PRECEPTO LEGAL aplicable al caso concreto, dejando en un completo
indefensión a nuestra mandante al no saber los fundamentos de he
derecho por los cuales indebidamente se dejó de cumplir con todos y cad
los requisitos que establece la Ley Suprema dentro de la convocato
licitaciones [redacted] p
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

Tienen aplicación al caso concreto las siguientes jurisprudencias:

***"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FO
LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN E
JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMU
DECISIÓN.***

*El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el
constitucional relativa a la fundamentación y motivación
propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "par
conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer
de manera completa la esencia de todas las circunstancias y
que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evi
claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el m
decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tan
que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro fo
una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida
del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es vá
una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la exp
estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes p
citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero su
acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de
lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMI
DEL PRIMER CIRCUITO."*[10]

***"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCI
SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.***

*Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y
toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de
norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias
razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisi
que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o
preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se
razones que la autoridad tuvo para dictar la resolució
corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien
existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de au
normas aplicables a éste.*

---

[10] Novena Época. Registro: 175082. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Ju
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXIII, Mayo de 2006. Materi
Tesis: I.4o.A. J/43. Página: 1531.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CIRCUITO."[11]

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autor estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al c lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circu especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hay en consideración para la emisión del acto, siendo necesario ad exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas apli decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativ que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de ma escrito de autoridad competente que funde y motive la causa procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que ap actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos d sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administ especificamente, para poder considerar un acto autorita correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Lo legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gober que esté obligado al pago, que serán señalados con toda precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos ap b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado."[12]

Por esa circunstancia, se debe conceder el amparo y protección justicia federal a la quejosa, para el efecto de que la responsable funde los actos reclamados.

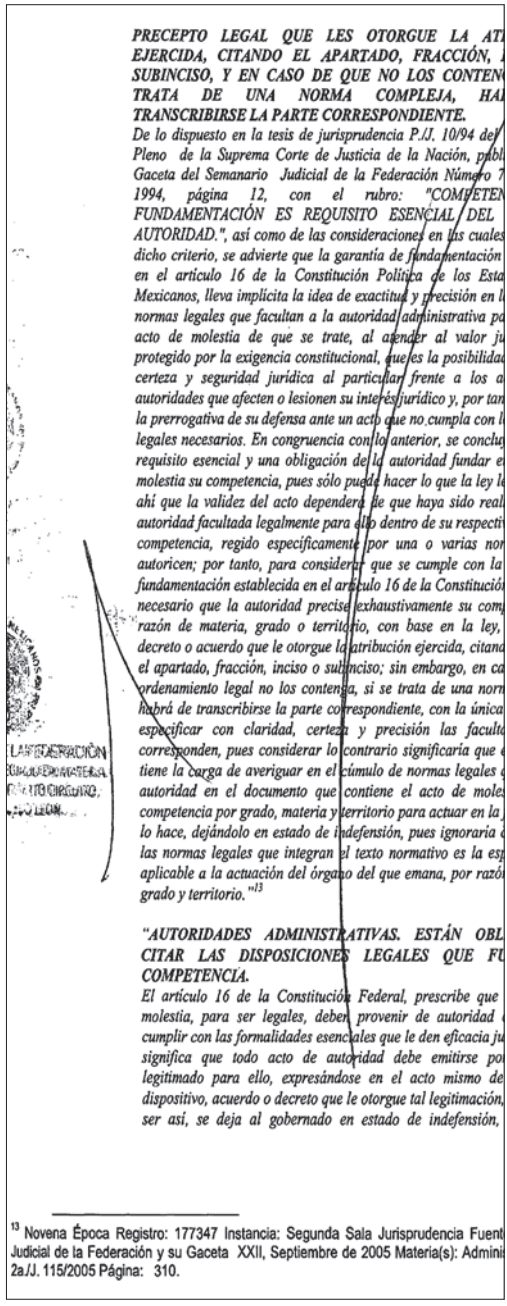
SEGUNDO.- Los actos reclamados a las responsables en los incisos del capítulo de actos reclamados, **VIOLENTA DIRECTAMENTE** el Tra Libre Comercio de América del Norte, en su capítulo de Compras de Público, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y C Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José) y De Universal de los Derechos Humanos, así como las garantías indi contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17, 103, 107, 133 y 134 de la Co General de la República, pues denota una **AUSENCIA TOT FUNDAMENTACIÓN**, ya que las autoridades fueron **OMISAS** en CI **PRECEPTO LEGAL** aplicable a su **COMPETENCIA,** dejando en un estado de indefensión a nuestra mandante al no saber si ésta tiene fa para haber emitido la convocatoria a las licitaciones **LO-009000975-N14** [redacted], publicadas en el Diario Oficial de la Federac de diciembre de 2013.

Tienen aplicación al caso concreto las siguientes jurisprudencias:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRA MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL A MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE

[11] Novena Época. Registro: 173565. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Juris Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Enero de 2007. Común. Tesis: I.6o.C. J/52. Página: 2127.

[12] No. Registro: 216,534. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fede Abril de 1993. Tesis: VI. 2o. J/248. Página: 43.



PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA AT
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN,
SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTEN
TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HA
TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.

De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publ Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 7 1994, página 12, con el rubro: "COMPETEN FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación en el artículo 16 de la Constitución Política de los Esta Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en l normas legales que facultan a la autoridad administrativa pa acto de molestia de que se trate, al atender al valor ju protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilida certeza y seguridad jurídica al particular frente a los a autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tan la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con l legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se conclu requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar e molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido real autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respecti competencia, regido específicamente por una o varias nor autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constituci necesario que la autoridad precise exhaustivamente su com razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citand el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en ca ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norm habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única especificar con claridad, certeza y precisión las faculta corresponden, pues considerar lo contrario significaría que tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales autoridad en el documento que contiene el acto de moles competencia por grado, materia y territorio para actuar en la lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría las normas legales que integran el texto normativo es la esp aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razó grado y territorio."[13]

"AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ESTÁN OBL
CITAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FU
COMPETENCIA.

El artículo 16 de la Constitución Federal, prescribe que molestia, para ser legales, deben provenir de autoridad cumplir con las formalidades esenciales que le den eficacia ju significa que todo acto de autoridad debe emitirse po legitimado para ello, expresándose en el acto mismo de dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, ser así, se deja al gobernado en estado de indefensión,

[13] Novena Época Registro: 177347 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuent Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Septiembre de 2005 Materia(s): Admini 2a./J. 115/2005 Página: 310.

examinar si la actuación de la autoridad emisora se encuentra d
ámbito competencial respectivo."[14]

"COMPETENCIA. FUNDAMENTACIÓN DE LA.
Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las
individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los
14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y
requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindi
que sean emitidos por autoridad competente y cumplién
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que sig
todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien
está legitimado, expresándose como parte de las formalidades e
el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el d
acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo co
dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conoce
que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter c
emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de exam
actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito cor
respectivo, y si éste es o no conforme a la ley, para que, en su ca
aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo
funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga,
puede acontecer que su actuación no se adecua exactamente a
acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contrad
la ley secundaria o con la Ley Fundamental."[15]

TERCERO.- Los actos **OMISIVOS** reclamados a las responsable incisos c), d), e), f), k), l), m) y n) dentro del capítulo de actos rec **VIOLENTAN DIRECTAMENTE** el Tratado de Libre Comercio de Am Norte, en su capítulo de Compras del Sector Público, Convención A Sobre Derechos Humanos (Pacto San José) y Declaración Universa Derechos Humanos, así como las garantías individuales contenidas artículos 103, 107, 133 y 134 de la Constitución General de la Repúbli denotan una **AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN**, ya que fueron adoleciendo de los mínimos requisitos de legalidad y seguridad contemplados en el Pacto Federal Mexicano y en los Tratados Internacio los que México es parte, lo que hace físicamente imposible que se procedimientos que cumplan con la economía, eficacia, eficiencia, imp publicidad y honradez como lo dispone el imperativo categórico 134 Suprema.

Arrojando desde este momento la carga de la prueba a la responsable al tenor de las siguientes interpretaciones judiciales:

"LICITACIÓN PÚBLICA. ETAPAS DEL PROCED
ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN SU DES
CRONOLÓGICO.
El procedimiento administrativo de licitación pública, en su
cronológico, constituye una concatenación de actos despleg
siguientes etapas: I. El pliego de condiciones conforme al cua
llamado a los interesados; II. La presentación de ofertas; y, III
de éstas por la administración, que culmina con la aceptación
conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, op

[14] No. Registro: 191,575. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Julio de 2000. Tesis: I.4o.A. J/16. Página: 613

[15] No. Registro: 203,903. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. Novena Época Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Noviembre de 1995. Tesis: I.2o.A. J/6. Página: 338.

demás circunstancias pertinentes (conforme al artículo 134
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a través
fallo y su notificación al interesado. En esta última etapa debe esta
cuáles son los derechos de los participantes en la licitación
resultaron ganadores, si es que les asiste alguno, pues aunque n
derecho a la adjudicación, sí lo tienen a la participación
competencia justa. En este sentido, conviene precisar que en caso d
actos que vicien el procedimiento de licitación, los participantes
con medios de impugnación para la defensa de su interés legítim
debe entenderse como la facultad para lograr que la a
administrativa se adecue a la ley, aunque no derive en un benefi
ellos."[16]

"ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIV
ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLE
JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL
ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRT
OMISIÓN."[17]

"ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPO
DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD Q
RECLAME."[18]

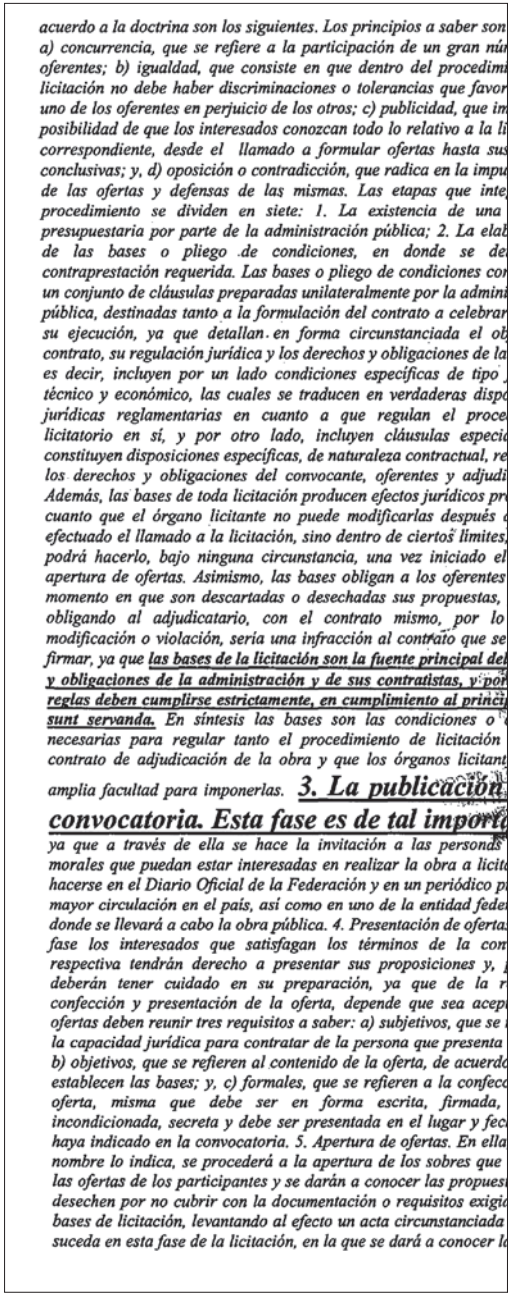
Tienen aplicación al caso concreto las siguientes interpret
judiciales:

"LICITACIÓN PÚBLICA. EL CUMPLIMIENTO DE SUS BA
REQUISITO INDISPENSABLE PARA ANALIZAR LAS OFE
ADJUDICAR EL CONTRATO RESPECTIVO.
De acuerdo a lo que establece el artículo 134 constitucional, la ce
de los contratos de obra pública, está precedida de un proc
específico que, además de constituir un requisito legal para la f
del acuerdo contractual, servirá para seleccionar a su contraparte
procedimiento se le denomina "licitación", pues a través
administración pública (federal, estatal o municipal), elige a la
física o moral, que le ofrece las condiciones más convenientes e
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, e
honradez, para celebrar un contrato determinado y, para ello
llamado a los particulares de manera impersonal o personal,
formulen sus ofertas a fin de llevar a cabo la contratación. En bas
precepto constitucional, en México las licitaciones son de tipo
Según la doctrina, la licitación pública constituye un proc
mediante el cual la administración pública selecciona a una pers
o moral, para que realice la construcción, conservación, mante
reparación o demolición de un bien inmueble o mueble en ben
interés general y, que consiste en una invitación dirigida a
interesados para que sujetándose a las bases establecidas pres
ofertas y de ellas seleccionar a la más conveniente. Los princ
rigen a dicha licitación y las etapas que integran su procedim

[16] Novena Época. Registro: 171994. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis A
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007. M
Administrativa. Tesis: I.4o.A.588 A. Página: 2651.

[17] Novena Época. Registro: 162441. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesi
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Abril de 2011. Materia(s
Tesis: I.3o.C.110 K. Página: 1195.

[18] Octava Época. Registro: 213037. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesi
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, Marzo de 1994. Materia(s): Com
II.2o.201 K. Página: 301.



acuerdo a la doctrina son los siguientes. Los principios a saber son
a) concurrencia, que se refiere a la participación de un gran nú
oferentes; b) igualdad, que consiste en que dentro del procedim
licitación no debe haber discriminaciones o tolerancias que favor
uno de los oferentes en perjuicio de los otros; c) publicidad, que im
posibilidad de que los interesados conozcan todo lo relativo a la li
correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus
conclusivas; y, d) oposición o contradicción, que radica en la impu
de las ofertas y defensas de las mismas. Las etapas que inte
procedimiento se dividen en siete: 1. La existencia de una
presupuestaria por parte de la administración pública; 2. La elab
de las bases o pliego de condiciones, en donde se de
contraprestación requerida. Las bases o pliego de condiciones co
un conjunto de cláusulas preparadas unilateralmente por la admini
pública, destinadas tanto a la formulación del contrato a celebrar
su ejecución, ya que detallan en forma circunstanciada el ob
contrato, su regulación jurídica y los derechos y obligaciones de la
es decir, incluyen por un lado condiciones específicas de tipo
técnico y económico, las cuales se traducen en verdaderas disp
jurídicas reglamentarias en cuanto a que regulan el proce
licitatorio en sí, y por otro lado, incluyen cláusulas especi
constituyen disposiciones específicas, de naturaleza contractual, re
los derechos y obligaciones del convocante, oferentes y adjudi
Además, las bases de toda licitación producen efectos jurídicos pr
cuanto que el órgano licitante no puede modificarlas después
efectuado el llamado a la licitación, sino dentro de ciertos límites,
podrá hacerlo, bajo ninguna circunstancia, una vez iniciado el
apertura de ofertas. Asimismo, las bases obligan a los oferentes
momento en que son descartadas o desechadas sus propuestas,
obligando al adjudicatario, con el contrato mismo, por lo
modificación o violación, sería una infracción al contrato que se
firmar, ya que **las bases de la licitación son la fuente principal de**
y obligaciones de la administración y de sus contratistas, y por
reglas deben cumplirse estrictamente, en cumplimiento al princi
sunt servanda. En síntesis las bases son las condiciones o
necesarias para regular tanto el procedimiento de licitación
contrato de adjudicación de la obra y que los órganos licitant
amplia facultad para imponerlas. **3. La publicación**
convocatoria. Esta fase es de tal import
ya que a través de ella se hace la invitación a las personas
morales que puedan estar interesadas en realizar la obra a licit
hacerse en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico p
mayor circulación en el país, así como en uno de la entidad fede
donde se llevará a cabo la obra pública. 4. Presentación de oferta
fase los interesados que satisfagan los términos de la con
respectiva tendrán derecho a presentar sus proposiciones y,
deberán tener cuidado en su preparación, ya que de la
confección y presentación de la oferta, depende que sea acep
ofertas deben reunir tres requisitos a saber: a) subjetivos, que se
la capacidad jurídica para contratar de la persona que presenta
b) objetivos, que se refieren al contenido de la oferta, de acuerd
establecen las bases; y, c) formales, que se refieren a la confec
oferta, misma que debe ser en forma escrita, firmada,
incondicionada, secreta y debe ser presentada en el lugar y fec
haya indicado en la convocatoria. 5. Apertura de ofertas. En ella
nombre lo indica, se procederá a la apertura de los sobres que
las ofertas de los participantes y se darán a conocer las propues
desechen por no cubrir con la documentación o requisitos exigi
bases de licitación, levantando al efecto un acta circunstanciada
suceda en esta fase de la licitación, en la que se dará a conocer l

que se conocerá el fallo respectivo. 6. Adjudicación, es el acto
el órgano estatal licitante, determina cuál de las propuesta
ventajosa o conveniente para la administración pública.
adjudicación, el órgano convocante, deberá realizar un dicta
en donde deberá considerar los requisitos cuantitativos y cu
los oferentes, a fin de determinar cuál de ellos reúne las
legales, técnicas y económicas requeridas por la convoca
Perfeccionamiento del contrato, que es la última fase del proc
licitación, en donde una vez que se conozca el nombre de
ganadora, el órgano licitante como el adjudicatario pr
formalizar o perfeccionar el contrato respectivo. ***Luego, de a***
anteriores etapas del procedimiento de licitación, la fase má
de éste, es la elaboración de las bases o pliego de condici
como se indicó en párrafos anteriores, son la fuente principal
obligaciones de la administración pública y de sus contratant
sus reglas o cláusulas deben cumplirse estrictamente, de ma
violación o modificación después de la presentación de
implicaría una violación al contrato que se llegue a firmar,
organismo o dependencia licitante, al examinar y eval
procedimiento de la licitación pública, deberá revisar como u
primaria e ineludible los requisitos de forma, que son esenci
del contrato que se llegue a concretar, es decir, deberá ve
oferentes cubrieron con cada uno de los requisitos que se f
bases y si dicho procedimiento fue seguido en todas su
infracción alguna al mismo, pues sólo de esa manera se pued
el contrato respectivo no esté viciado de origen, ya qu
irregularidades en el procedimiento o incumplimiento de las
licitación por otra parte de alguno de los oferentes, sin q
convocante las tome en cuenta, no obstante su evidencia o tra
adjudique el contrato al oferente infractor, tanto el licita
oferente ganador infringirían el principio, no sólo ya
administrativo derivado de la naturaleza de los contratos ad
consistentes en el pacta sunt servanda, sino también por aca
ley administrativa (Ley de Obras Públicas y su Reglamento)
esa forma el contrato respectivo; por tanto, el organismo
adjudicar un contrato de obra pública, siempre debe verifica
los requisitos de forma para que después analice las propues
a su contenido o fondo, todo ello conforme a las reglas que se
en las bases o pliego de condiciones de la licitación."[19]

"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JE
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETAC
ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIEN
En el mencionado precepto constitucional no se consa
individual alguna, sino que se establecen los principios d
constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la
Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratad
con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la
aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de to
debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ord
pesar de las disposiciones en contrario que pudiera
Constituciones o en las leyes locales, pues independiente
conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución
Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la
libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere
concernientes a su régimen interno, en tanto no se vul
Federal, porque deben permanecer en unión con la Federa

[19] Octava Época. Registro: 210243. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Octubre de 1994, Materia(s): Tesis: I. 3o. A. 572 A. Página: 318.

principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar
en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Cart
manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de
resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben pr
disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes or
cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local cor
pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejer
materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitu
permitan desconocer las leyes emanadas del Con
correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser i
la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para es

CUARTO.- Los actos reclamados a las responsables en los inci
conculcaron los instrumentos internacionales consistentes en la
Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José), la Declaració
de los Derechos Humanos, y el Tratado de Libre Comercio de América
en su capítulo de Compras del Sector Público, así como los artículos 1
35 fracción V, 133 y 134 de la Constitución General de la Repú
ejerciendo el derecho de petición, nuestra representada formuló por
forma pacífica y respetuosa una solicitud el día 24 de diciembre de est
persona que se llama [redacted], se negó a recibirle la
cuestionarle el motivo de su negativa, respondió que su superior de nor
[redacted] le dijo que no recibiera nada relacionado con [redacted]

Tienen aplicación al caso concreto las siguientes jurisprudencias:

"DERECHO DE PETICIÓN.
Las garantías que otorga el artículo 8o. de la Constitución
consisten en que se tramiten las peticiones sin las
establecidas por la ley, sino que a toda petición hecha por
bien o mal formulada, debe recaer un acuerdo, también por
autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligació
conocer en breve término, al peticionario."[21]

"DERECHO DE PETICIÓN.
Procede conceder el amparo por violación al artículo 8o.
si la autoridad a quien señala como responsable, no ha
alguna a la solicitud del quejoso."[22]

"PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECL
EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR V
ESE DERECHO."[23]

Por lo tanto, para que la quejosa no quede en estado de indefen
en aptitud de gozar de las mismas garantías individuales que cua

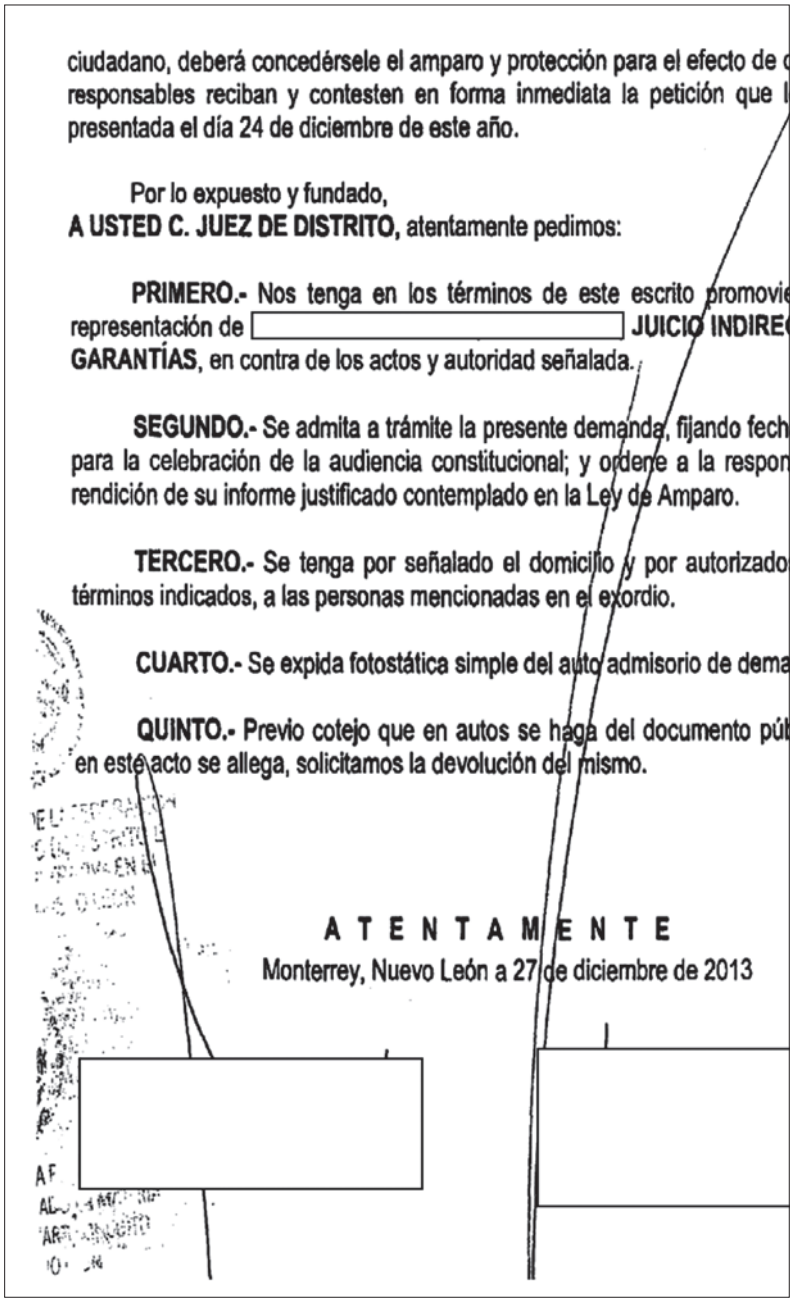
---

[20] Novena Época. Registro: 180240. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuen
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004. Materia(s):
Tesis: 1a./J. 80/2004. Página: 264.

[21] No. Registro: 324,658. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Quinta Époc
Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación LXXVII. Tesis: Página: 5

[22] No. Registro: 338,449. Tesis aislada. Materia(s): Común. Quinta Época. Instan
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XXVI. Tesis: Página: 1235.

[23] Novena Época. Registro: 165204. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Febrero de 20
Común. Tesis: VI.1o.A. J/49. Página: 2689.



ciudadano, deberá concedérsele el amparo y protección para el efecto de q
responsables reciban y contesten en forma inmediata la petición que l
presentada el día 24 de diciembre de este año.

Por lo expuesto y fundado,
A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, atentamente pedimos:

PRIMERO.- Nos tenga en los términos de este escrito promovie
representación de [ ] **JUICIO INDIRE**
GARANTÍAS, en contra de los actos y autoridad señalada.

SEGUNDO.- Se admita a trámite la presente demanda, fijando fech
para la celebración de la audiencia constitucional; y ordene a la respon
rendición de su informe justificado contemplado en la Ley de Amparo.

TERCERO.- Se tenga por señalado el domicilio y por autorizado
términos indicados, a las personas mencionadas en el exordio.

CUARTO.- Se expida fotostática simple del auto admisorio de dema

QUINTO.- Previo cotejo que en autos se haga del documento púb
en este acto se allega, solicitamos la devolución del mismo.

A T E N T A M E N T E
Monterrey, Nuevo León a 27 de diciembre de 2013

"En el tema de hecho notorio se invoca la jurisprudencia 27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época, página 117, registro 198220, que establece lo siguiente:

"'HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.—Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial.'

"De igual manera se invoca la jurisprudencia 812, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que se comparte, consultable en el *Apéndice* de 1995, Tomo VI, Parte T.C.C., Octava Época, página 552, registro 394768, que establece lo siguiente:

"'HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.—Se considera que son notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria en un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes.'

"Luego, resulta inconcuso que en el caso se da uno de los supuestos de excepción que prevé dicho precepto legal, de ahí que en la especie no se surta la causal de improcedencia invocada por el a quo, hasta la presente estadía procesal.

"Cuestión contraria, hubiese sucedido, si la quejosa paralelamente a las violaciones directas a la Constitución hubiese alegado violaciones indirectas o de legalidad, aspecto en el que se encontraba obligada a agotar los medios de defensa que establezcan las leyes secundarias relativas y esperar a la emisión final del procedimiento.

"Dicho principio tiene como sus excepciones las siguientes: a) los actos no afectan a personas extrañas al procedimiento administrativo natural, b) no son actos dentro de juicio que se estimen de imposible reparación, c) la ley que instituye el juicio contencioso, contempla la suspensión y no exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para la paralización de los actos; y, d) cuando se trate de actos donde únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es, la falta de fundamentación del acto.

"Las excepciones de referencia, se relatan en la tesis 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156 del Tomo XII, julio de 2000, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, del tenor literal siguiente:

"'DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.—De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y, X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.'

"De igual manera sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación*, Volúmenes 175-180, Tercera Parte, página 119, registro: 237480, que establece lo siguiente:

"'RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.—En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca.'

"En congruencia con el criterio de la Segunda Sala señalado, la quejosa refirió en sus conceptos, violaciones directas a la Constitución, ya que, primordialmente, se argumentó que los actos reclamados se realizaron omitiendo en forma total la fundamentación, al ser omisa en citar los preceptos legales aplicables al caso concreto, lo que le deja en completo estado de indefensión, y por ello se sostiene que se viola en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 17, 103, 107, 133 y 134 de la Constitución Federal.

"Ello es así, ya que del primero al cuarto de los conceptos de violación, la parte quejosa señaló como planteamiento la inconstitucionalidad del acto, al aducir violación a las garantías de fundamentación y motivación, previstas en los artículo 14 y 16 constitucionales, por considerar que la publicidad de los resúmenes de la licitaciones públicas se hicieron omitiendo citar en forma total el fundamento legal aplicable.

"De la digitalización de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en su escrito de demanda de garantías, se puede apreciar, con facilidad, que los reclamos están encaminados y circunscritos a poner en evidencia la violación a sus derechos fundamentales. Es decir, a señalar violaciones directas a la Carta Magna, pues principalmente se argumentó que los actos reclamados se realizaron sin fundamento legal alguno y por autoridad incompetente. Por ello, sostuvo que se violaron en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 17, 133 y 134 de la Constitución Federal.

"Es por ello, como lo ha sostenido el Pleno del Más Alto Tribunal de la Nación, que antes de acudir al amparo no existe obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la anticonstitucionalidad de ésta, ya que sería contrario a los principios de derecho, el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de un acto carente de la debida fundamentación, cuya obligatoriedad impugna, por conceptuarla contraria a los textos de la Constitución.

"Dichos razonamientos encuentran sustento, en la tesis jurisprudencial 343 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995 (sic), Tomo I, página 319, Sexta Época, cuyo texto literal es el siguiente:

"'AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. RECURSOS ORDINARIOS.—Antes de acudir al amparo no existe obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la anticonstitucionalidad de ésta, ya que sería contrario a los principios de derecho, el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de esa ley, cuya obligatoriedad impugnan, por conceptuarla contraria a los textos de la Constitución.'

"A mayor abundamiento, es incorrecta la determinación del a quo, en el sentido de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXXII (sic), en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por no haberse impugnado la determinación final en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, porque como ya

quedó evidenciado, los planteamientos propuestos en cada uno de los conceptos de violación de la demanda de garantías, son referidos a violaciones directas de la Constitución, y específicamente, respecto de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en el caso se adujo el quebranto de la garantía de fundamentación al no contener el acto impugnado, los fundamentos legales que le dan competencia a la autoridad en la emisión de los resúmenes de las convocatorias de las licitaciones públicas, que en relación con los argumentos que se invocan, resulta procedente su reclamo en forma directa, mediante la acción constitucional, sin necesidad de esperar a la emisión final del acto administrativo.

"Además, porque al tratarse de actos dictados dentro del procedimiento se tornan de imposible reparación al señalarse afectación material de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ello de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

"Lo anterior, ya que la quejosa se duele fundamentalmente, que la responsable fue omisa en citar los fundamentos legales, lo que dice afecta materialmente sus derechos fundamentales tutelados en la Carta Magna.

"Sin que lo que hasta aquí expresado prejuzgue sobre la fundamentación del acto, ya que la autoridad responsable en términos del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, al ser un amparo en materia administrativa en su informe justificado deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado y en su caso la parte quejosa quedará facultado para ampliar la demanda respectiva en dicho aspecto.

"Por ende, dada la eficacia jurídica de los argumentos examinados, resulta innecesario analizar los restantes agravios, pues se colma la pretensión medular de la parte quejosa, que es precisamente que se admita a trámite la demanda de amparo.

"Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia VI.1o. J/6 107, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, misma que se comparte por este tribunal, por lo innecesario del análisis del resto de los agravios formulados por la parte quejosa, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 470, registro 202541, cuyos rubro y texto dicen:

"'AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.—Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente.'

"Así, ante lo fundado de los argumentos formulado por la quejosa, procede revocar el acuerdo recurrido, dictado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, y, en consecuencia al no advertir este tribunal causa manifiesta de improcedencia de conformidad con los artículos 61, 62 y 103 de la Ley de Amparo, se ordena admitir a trámite la demanda de garantías presentada por la representación legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.

"Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

"PRIMERO.—Es fundado el recurso de queja.

"SEGUNDO.—Se revoca el auto recurrido.

"TERCERO.—Se ordena al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, admita la demanda de garantías presentada por el representante legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las razones expuestas en el último de los considerando del presente fallo."

CUARTO.—El **Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito**, al resolver el **amparo en revisión 154/2012-III**, en sesión de doce de julio de dos mil doce, determinó lo siguiente:

"QUINTO.—**Estudio de los agravios.** Son infundados y en parte inoperantes los agravios planteados por la quejosa.

"La recurrente señaló en su primer agravio, que la resolución recurrida era contraria a derecho, pues la Juez de Distrito había resuelto de manera errónea, que el procedimiento de licitación pública es un procedimiento administrativo que se lleva en forma de juicio, arribó a dicha conclusión de manera dogmática. Que contrario a lo expuesto por la a quo, la licitación pública es un procedimiento administrativo, pero no seguido en forma de juicio y, por tanto, la publicación de la convocatoria pública, sí puede ser impugnada en vía de amparo por vicios propios.

"Se dice que el agravio es infundado, ya que contrario a la exposición de la impetrante, la Juez de Distrito resolvió de manera correcta en el fallo recurrido, pues tal y como lo apreció, el acto reclamado no era impugnable mediante el juicio de control de constitucionalidad, debido a que el acto reclamado consistía en la etapa inicial de un procedimiento administrativo (licitación pública) seguido en forma de juicio.

"A continuación, se expondrán las razones para arribar a la presente conclusión:

"En primer orden, se debe citar como fundamento del fallo al artículo 134 constitucional, el cual, a la letra establece:

"'Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

"'Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

"'Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

"'Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

"'El manejo de recursos económicos federales por parte de los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

"'Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución.

"'Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

"'La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

"'Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.'

"La disposición transcrita revela, que el otorgamiento que hace el Estado para una concesión de prestación de servicios de cualquier naturaleza, está precedida de un procedimiento específico denominado licitación pública, que busca asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, efectuado a través de convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes.

"La licitación pública, es definida doctrinalmente como un procedimiento de concurso mediante convocatoria pública, a través del cual, la entidad o dependencia administrativa, recibe y analiza propuestas presentadas por los concursantes para la ejecución de una obra o la adquisición de bienes y servicios, con el objeto de escoger aquella que garantice las mejores condiciones para el Estado.[10]

"A través del procedimiento de licitación, la administración pública –federal, estatal o municipal–, elige a la persona física o moral, que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez, para celebrar un contrato determinado que otorgue la concesión de un servicio y para ello, hace un llamado a los particulares a fin de que formulen sus ofertas para llevar a cabo la contratación –en términos igualitarios–, y una vez que se evalúen las propuestas seleccionadas –lo que indica un proceso de selección y calificación–, se

[10] Castrejón García, Gabino Eduardo. *Derecho Administrativo*. 4a. Ed. México, Cárdenas Velasco Editores, 2010, p. 368.

resuelva a qué particular se considera idóneo como sustituto de la administración pública, para prestar un servicio a la población.

"Brinda apoyo a lo concluido, la tesis 2a. XXXIX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:

"'CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 1o., ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL), EN CUANTO EXCLUYE DE SU ÁMBITO DE APLICACIÓN A LOS CELEBRADOS POR LAS DEPENDENCIAS CON LAS ENTIDADES, O ENTRE ENTIDADES DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O CON ALGUNA PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las contrataciones en las que el Estado sea parte deberán sujetarse a procedimientos de licitación a fin de asegurar, al interés estatal, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que, por excepción, cuando no sea idónea la licitación, las leyes reglamentarias deberán establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que sirvan para acreditar la economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones de contratación para el Estado. En tal sentido, se concluye que el artículo 1o., antepenúltimo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al disponer que quedan excluidos del ámbito de su aplicación los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, entre alguna dependencia o entidad de la administración pública federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, es violatorio del referido precepto constitucional, pues aquel dispositivo no cumple con la obligación constitucional de previsión normativa, por cuanto hace al aspecto relativo a garantizar las mejores condiciones contractuales a favor del Estado. Ello es así, por un lado, porque el propio dispositivo constitucional no establece distinción alguna tratándose de los sujetos a quienes les serán aplicables sus disposiciones y, por otro, porque para satisfacer plenamente la finalidad que persigue aquél, la administración pública, centralizada o paraestatal, en el desempeño de su función pública, está obligada a hacerlo, buscando la eficiencia, la eficacia y la honradez.'[11]

[11] Consultable en la página 579 del Tomo XV, abril de 2002, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*.

"Sentado lo anterior, en la especie se tiene que la Juez de Distrito consideró que la licitación pública se constituía como un procedimiento seguido en forma de juicio, dado que ésta (la licitación) se constituye como un conjunto de actos concatenados entre sí, en los cuales el ente administrativo prepara una resolución definitiva, donde resolverá lo relativo a la adjudicación de la obra, bien o servicio; situación cuya naturaleza, tiene sustento en el artículo 134 de la Constitución Federal (insertado previamente).

"Que bajo tal premisa, era susceptible sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, por ser el acto impugnado uno de naturaleza intraprocesal dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio y, por ende, debía esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder impugnarlo. La a quo citó como fundamento de su argumentación la jurisprudencia 22/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Ahora bien, al haberse establecidos los argumentos de la quejosa, y los expuestos por la Juez en el fallo recurrido, este tribunal arriba a la conclusión de que contrario al dicho del particular, la a quo sí apreció de manera correcta la naturaleza del acto reclamado, pues efectivamente, el proceso de licitación pública, sí se constituye como un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

"En esta coyuntura de ideas, debe ser citada la jurisprudencia 22/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se analizó lo que debe entenderse por 'procedimiento seguido en forma de juicio', que dice textualmente:

"'PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.—La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la nece-

sidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión «procedimiento en forma de juicio», comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.'[12]

"En la jurisprudencia precitada, se advierte que la Segunda Sala del Máximo Tribunal consideró –en esencia– que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general (con algunas excepciones), es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales.

"Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión 'procedimiento en forma de juicio'.

"A ese respecto, la Sala consideró que en esa expresión debían comprenderse todos aquellos procedimientos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos

[12] Consultable en la página 196 del Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*.

en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.

"Criterio jurisprudencial que resulta obligatorio y vinculante para este Tribunal Colegiado en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, y de cuya interpretación se advierte con claridad que tal y como lo señaló la Juez de Amparo, el procedimiento de licitación sí constituye un procedimiento seguido en forma de juicio, puesto que la licitación pública que termina con la contratación, es un conjunto de actos tendentes a formalizar la actividad contractual del Estado, que se denomina procedimiento administrativo; cuya naturaleza jurídica consiste en el llamado que la administración pública hace a los particulares de manera impersonal, para que formulen sus ofertas, a fin de llevar a cabo la contratación.

"Dicho en otras palabras, ese procedimiento (licitación pública) constituye una concatenación de actos desplegados en las siguientes etapas:

"I. El pliego de condiciones conforme al cual se hace el llamado a los interesados;

"II. La presentación de ofertas; y,

"III. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes (conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a través de un fallo y su notificación al interesado.

"Bajo la línea argumentativa que se ha trazado, es que el agravio planteado por la recurrente cae ante el hecho irrefutable de que el procedimiento de licitación pública, sí constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, tanto por su naturaleza como por las etapas que lo constituyen.

"A este respecto, se comparte el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte por este tribunal, en la tesis del siguiente tenor:

"'LICITACIÓN PÚBLICA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN SU DESARROLLO CRONOLÓGICO.—El procedimiento administrativo de licitación pública, en su desarrollo cronológico, constituye una concatenación de actos desplegados en las siguientes etapas: I. El pliego de condiciones conforme al cual se hace el llamado a los interesados; II. La presentación de ofertas; y, III. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes (conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a través de un fallo y su notificación al interesado. En esta última etapa debe establecerse cuáles son los derechos de los participantes en la licitación que no resultaron ganadores, si es que les asiste alguno, pues aunque no tienen derecho a la adjudicación, sí lo tienen a la participación en una competencia justa. En este sentido, conviene precisar que en caso de existir actos que vicien el procedimiento de licitación, los participantes cuentan con medios de impugnación para la defensa de su interés legítimo, el que debe entenderse como la facultad para lograr que la actuación administrativa se adecue a la ley, aunque no derive en un beneficio para ellos.'[13]

"En este contexto, en el procedimiento de licitación pública, como se dijo, se emiten diversos actos cuya finalidad es la de formalizar la actividad contractual del Estado; o bien, una serie ordenada de actos procedimentales, concatenados entre sí por un nexo de causalidad y que se desenvuelven progresivamente con el objeto de llevar a cabo la formalización de un contrato de obra pública, de enajenación de un bien, o de prestación de un servicio.

"Por tanto, es válido lo resuelto por la Juez de Distrito, en el sentido de haber decretado el sobreseimiento del juicio de origen, al constituir el acto reclamado (publicación de la convocatoria de licitación pública **********), uno intraprocesal dentro de un procedimiento administrativo (licitación pública) seguido en forma de juicio, ello, en los términos de la jurisprudencia 22/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí lo infundado del agravio.

"Por otra parte, el segundo agravio de la quejosa, es inoperante.

"En éste, la persona moral señaló que la resolución recurrida era ilegal, por contener vicios de incongruencia y omisiones, ello, debido a que la Juez

[13] Consultable en la Novena Época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXVI, julio de 2007, página 2651.

de Distrito, de manera errónea advirtió que los actos reclamados dentro del procedimiento de licitación, no eran de imposible reparación.

"Refirió que la a quo fue omisa en analizar a fondo sus conceptos de violación, específicamente el segundo de ellos, en el cual, hizo valer la falta de competencia de la autoridad para emitir la convocatoria para la licitación pública materia de litis; hechos que a su parecer, son constitutivos de una violación directa a la Constitución Federal, y que por tanto, hacía procedente la promoción de su juicio de amparo.

"Lo inoperante del agravio, se debe básicamente a que su estudio, desnaturalizaría la naturaleza del recurso de revisión, pues se estudiarían cuestiones que no formaron parte del fallo recurrido, como lo es, el análisis de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de amparo, y que no fueron atendidos por la Juez de Distrito, justamente, por haberse decretado la improcedencia de la vía constitucional.

"Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo,[14] quien recurra una resolución de un Juez de Distrito, deberá exponer por escrito aquellos argumentos que rebatan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta la sentencia del a quo.

"Ahora bien, si el agravio se hace consistir en cuestiones ajenas que no formaron parte de aquella sentencia, o bien, que no combaten de forma directa los planteamientos expuestos por el Juez de Distrito, dichos argumentos merecerán el calificativo de inoperantes.

"En la especie, el quejoso aduce que la resolución de la Juez es ilegal, pues no atendió a lo expuesto en su segundo concepto de violación, en donde

---

[14] "**Artículo 88.** El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el que (sic) el recurrente expresará los agravios que le causa la resolución o sentencia impugnada; y cuando la cuantía del negocio determine la competencia del tribunal que deba conocer de recurso, proporcionará los datos necesarios para precisar esa cuantía (sic).
"Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, el recurrente deberá transcribir, textualmente, en su escrito, la parte de la sentencia que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
"Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expediente y una para cada una de las otras partes.
"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el Juez de Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el recurso."

manifestó que existía una vulneración al texto constitucional, pues la autoridad encargada de la publicación de la convocatoria para la licitación pública **********, carecía de facultades legales para ello.

"No obstante lo afirmado por la recurrente, el agravio es inoperante pues al respecto pretende que sea estudiado de primera mano una cuestión que resulta totalmente ajena al contenido de la resolución que por esta vía se combate, pues al respecto (falta de competencia de la autoridad responsable), nada pronunció la a quo, y no tanto por omisión, sino porque estimó improcedente el juicio de amparo y, por tanto, no le era dable (por lógica) analizar el argumento de la quejosa contenido en su segundo concepto de violación.

"Pues además, en su segundo agravio lejos de combatir la causa de improcedencia que estimó actualizada la Juez de amparo, pretende que este órgano colegiado, declare procedente el juicio a partir del estudio de segundo concepto de violación, situación (que como se mencionó) desvirtúa la naturaleza y alcance del recurso de revisión, pues ante la improcedencia del mismo, lo correcto es que los agravios fueran expuestos en dicho tenor, y no en uno diverso que controvirtiera el fondo del asunto.

"Bajo esta tesitura, es que el agravio resulta inatendible, por contener cuestiones ajenas a la materia de la revisión de la sentencia impugnada y, por tanto, el segundo agravio es inoperante.

"Resulta ilustrativa para la exposición del tema, la jurisprudencia 2a./J. 188/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"'AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.—Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expues-

tos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado.'[15]

"Con base en los anteriores criterios, así como en los argumentos expuestos, es que no resultan aplicables para resolver el tema los criterios jurisprudenciales que citó la recurrente en su segundo agravio.

"Por último, el tercer agravio es igualmente inoperante.

"La impetrante de amparo, refirió que la resolución impugnada no es consistente, pues señala como un hecho notorio el que la Juez de Distrito, en otro caso similar optó por amparar a un diverso quejoso, ante la falta de fundamentación en la publicación de la convocatoria, situación que invoca como un hecho notorio que debió tomar en cuenta la Juez al momento de estudiar su asunto.

"El argumento es ambiguo y superficial, por ende, debe ser calificado como inoperante e insuficiente para revocar la sentencia, pues el hecho de que la Juez de Distrito haya fallado en un determinado sentido en otro diverso juicio de amparo, no la vincula u obliga, a resolver de igual manera en otro de similares características.

---

[15] Registro digital: 166031, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXX, noviembre dos mil nueve, Novena Época, página 424.

"Suponiendo sin conceder, que el dicho de la quejosa fuera cierto, y que en similar asunto al suyo, la Juez de Distrito resolvió con criterios diversos, ello por sí mismo, no puede ser causa de revocación de un fallo, pues aun y cuando en ambos casos se tratara del mismo tema genérico, es posible que no se estuviera en el mismo supuesto, o bien, que fueran hechos valer otros conceptos de violación, que a diferencia de los expuestos por la quejosa, sí contravinieran la convocatoria para la licitación pública, a diferencia del presente caso, donde como bien lo señaló la Juez de primer grado, la quejosa enderezó su segundo concepto de violación en contra de la síntesis de la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación.

"Sin embargo, ante tales especulaciones, no es posible para este órgano colegiado adivinar las circunstancias o hechos que rodearon el dictado de la sentencia del diverso juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, y que llevaron al dictado de un fallo (que en estimación de la quejosa), contradice un criterio que ya había sido sostenido con anterioridad, para conceder el amparo en aquella ocasión.

"No obstante lo aducido, el argumento resulta inoperante, al pretender que la existencia de dos resoluciones sobre un mismo tema (publicación de la convocatoria de una licitación pública), en sentidos inversos, genere por sí misma un agravio suficiente para revocar (por ese solo hecho), aquella resolución que no fue favorable a los intereses de la parte, máxime si el argumento toral del tercer agravio en estudio, va encaminado más a tocar cuestiones de fondo, y no propiamente, combatir las razones que la a quo expuso para sobreseer en el juicio.

"Es aplicable, la jurisprudencia I.6o.T. J/109 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, y que es del tenor siguiente:

"'AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A COMBATIR EL FONDO DEL ASUNTO Y NO LAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO.—Si el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por estimar que no se combate un acto de imposible reparación, y el recurrente en sus agravios se limita a esgrimir argumentos relativos al fondo del asunto que no se abordó, debe concluirse que tales manifestaciones resultan inoperantes al no combatir las consideraciones relacionadas con la improcedencia del juicio.'[16]

[16] Registro digital: 162660, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXIII, marzo de dos mil once, Novena Época, página 2063.

"De modo que, al ser el agravio planteado por la quejosa superficial y ambiguo, el mismo resulta inoperante por insuficiente para revocar el fallo.

"Similar criterio se sostuvo (y se comparte) en la tesis I.4o.A. J/48 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dispone:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES.—Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.'[17]

"Así, ante lo infundado e inoperante de los agravios, lo procedente es confirmar la resolución de primera instancia, en la cual, se determinó sobreseer en el juicio de amparo.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado;

"RESUELVE:

"PRIMERO.—En la materia, se confirma la sentencia constitucional recurrida.

---

[17] Registro digital: 173593, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, enero de dos mil siete, página 2121.

"SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos y las razones expuestas en el quinto punto considerativo de la resolución recurrida."

QUINTO.—El **Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito**, al resolver el **recurso de queja 12/2014-I**, en sesión de trece de febrero de dos mil catorce, estimó lo siguiente:

"CUARTO.—Estudio de los agravios. La parte recurrente, expone en sus agravios, los siguientes argumentos esenciales:

"En el primer agravio, sostiene que de manera errónea se determinó que el procedimiento de licitación pública es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues tal criterio no encuentra sustento ni en la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni en la doctrina.

"La doctrina en el derecho administrativo mexicano, considera que la licitación es una invitación impersonal a los interesados, para que sujetándose a sus bases, formulen propuestas de las cuales la administración selecciona y acepta la más ventajosa tanto técnica como económica.

"También considera al procedimiento administrativo lato sensu, como el conjunto de actos concatenados entre sí, tendientes a preparar la resolución administrativa de la autoridad que ha de comunicarse al particular y que incide en su esfera jurídica, ya de manera positiva, ampliando su esfera de derechos, ya de forma negativa restringiendo esta última. Esto significa que al hacer distinción entre el procedimiento administrativo propiamente dicho y el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el legislador dispuso diferencias entre ambos, sin que hubiere definido qué debía entenderse por este último; la acepción 'seguido en forma de juicio' es una manera de diferenciarlo de un procedimiento administrativo común.

"Para el tratadista de la UNAM, Dr. Sergio López Ayllón, existe un procedimiento seguido en forma de juicio, cuando exista contienda entre partes y ésta sea resuelta por la autoridad administrativa; o cuando el particular pueda aportar elementos de prueba y alegatos en favor de su causa, respecto de la cual, la autoridad emitirá una resolución, es decir, que se le otorgue el derecho de audiencia y se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento administrativo; lo que no ocurre en la licitación.

"Es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95, que dice:

"'FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.' (se transcribe)

"El Juez aplica en forma errónea la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de rubro:

"'PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.' (se transcribe)

"En la licitación el particular sólo interviene cuando presenta su oferta y cuando espera la resolución de la autoridad contratante. Por ende, nos encontramos ante un procedimiento administrativo propiamente dicho, y no de uno seguido en forma de juicio.

"No obsta que el Juez se apoye en los criterios erróneos sustentados por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; en razón de que, el Segundo, resolvió el asunto sometido a su consideración de forma dogmática y sin un estudio jurídico adecuado; máxime cuando aplicó de manera errónea la jurisprudencia con número de registro 184435; mientras que el tercero, efectuó una interpretación incorrecta de la jurisprudencia mencionada, basando sus argumentos en una premisa falsa.

"Para demostrar lo erróneo de los mencionados criterios, se cita el sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien al resolver sobre un procedimiento de verificación, dijo en su ejecutoria:

"'... y establecen el derecho de los visitados para formular observaciones en el acto de la diligencia ofrecer prueba por escrito para desvirtuar los hechos contenidos en las actas; debe estimarse que la orden de visita de verificación constituye un procedimiento en forma de juicio, que culmina con el dictado de la resolución ...'

"Cabe citar la tesis de jurisprudencia con número de registro 169507, que dice:

"'El emplazamiento es el acto procesal por virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad de una oportuna defensa y cuya finalidad es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso, o en un procedimiento seguido en forma de juicio cumplan con la garantía de audiencia, contenida en el artículo 14 de la Constitución.'

"Asimismo, los criterios aislados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, que dicen respectivamente:

"'En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías en que se reclamen actos dictados por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando entre otros supuestos, constituyen actos autónomos, esto es, que no formen parte de un procedimiento seguido en forma de juicio mediante el cual, la autoridad deba decidir una controversia entre partes contendientes o, inclusive, aquellos en los que simplemente se limite a seguir el trámite legal establecido para dar audiencia a un particular con el fin de preparar, estudiar o prevenir la resolución definitiva.'

"'Del análisis del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que regula la toma en que deben actuar las autoridades fiscales cuando requieren documentación a los contribuyentes con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se advierte que la orden de revisión de escritorio o gabinete al ser notificada, constituye el primer acto del ejercicio concreto de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, a través del procedimiento administrativo de verificación fiscal, seguido en forma de juicio, en virtud de que ese mandamiento forma parte de una serie de actos concatenados que permiten el ejercicio de la garantía de audiencia y concluyen con una resolución administrativa ...'

"Si la licitación pública es un procedimiento administrativo, compuesto por una serie de actos concatenados entre sí, mediante los cuales la autoridad administrativa prepara su resolución consistente, en el fallo de adjudicación del contrato, haciéndolo de manera unilateral y sin participación alguna del gobernado; resulta inconcuso que dicho procedimiento no es seguido en forma de juicio.

"En el segundo agravio, sostiene que suponiendo sin conceder, que tal procedimiento pudiera considerarse como seguido en forma de juicio, el juz-

gador no tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, que dice:

"'Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"'III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

'"...

"'b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.'

"En el caso, el acto impugnado se hizo consistir en la violación directa al artículo 8o. constitucional, porque la autoridad administrativa convocante, se negó rotundamente a cumplir con su deber de contestar las preguntas formuladas por escrito y que le fueron entregadas en el acto de la Junta de aclaraciones, así como a proporcionar los estudios, planos y proyectos a que se encuentra obligada por la ley común, a efecto de cumplir con la garantía de información contenida en el artículo 134 constitucional, en relación con la presentación de ofertas solventes dentro del procedimiento licitatorio.

"Así, al negarse a proporcionar la información puntual y concreta a efecto de poder preparar una oferta solvente, se le impidió la libre participación en la licitación pública de trato; lo que le generó un agravio que afectó de manera inmediata y directa el derecho contenido en el tercer párrafo del artículo 134 constitucional; agravio éste que es de imposible reparación en el acto final de la licitación, pues al carecer de información para la preparación de la oferta, se le impidió la participación en el procedimiento licitatorio, así como el derecho fundamental de libre acceso al trabajo contenido en el diverso 5o. del mismo ordenamiento.

"El Juez manifestó que el amparo procede en el caso que la quejosa reclame una resolución que la deje fuera del procedimiento; y eso es precisamente lo que se reclamó en la demanda, respecto de lo cual el juzgador no se pronunció.

"Para apoyar sus alegaciones, invoca la jurisprudencia 2a./J. 22/2012, de rubro: 'CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.' (se transcribe)

"QUINTO.—Son ineficaces los motivos de agravio expuestos por la parte recurrente, de acuerdo con las consideraciones siguientes:

"'Previamente, conviene señalar como antecedentes más relevantes del caso, que se advierten de los antecedentes de la demanda de garantías remitida en copia certificada, del siguiente tenor:

"'a. La quejosa compareció a promover demanda de amparo indirecto contra actos del presidente y diversas autoridades del Municipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, de quienes reclamó la licitación pública, su convocatoria y la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil trece, contenida en la denominada «acta de Junta de aclaraciones» «mediante la cual se niega expresamente a mi representada la información solicitada a efecto de preparar una oferta solvente y, por ende, la negativa a poder participar en dicha licitación pública.»

"'b. La convocatoria para la licitación pública nacional con número **********, para la pavimentación con carpeta asfáltica, en diversas calles del Municipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León.

"'c. La quejosa se inscribió a la licitación pública por medios electrónicos; el sábado veintiuno de diciembre de dos mil trece, la convocante llevó a cabo la visita de obra a las diez horas y aproximadamente cuarenta minutos después, celebró la Junta de Aclaraciones, «siendo patente que dicho evento se encontraba programado a las 12:00 horas».

"'d. El mismo veintiuno de diciembre de dos mil trece, a las once horas con cuarenta y cinco minutos, la quejosa presentó ante la convocante, hoy responsable, el pliego de cuestionamientos técnicos y legales que debería contestar en el acto de la Junta de aclaraciones y que deberían quedar asentadas en el acta que se debía levantar, acorde con el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

"'e. La convocante se concretó a recibir el pliego mencionado, pero negándose a contestar las preguntas relativas a la licitación siendo evidente que en la minuta de la Junta de aclaraciones la responsable sólo contestó algunos cuestionamientos de la empresa denominada Sellos y Pavimentos

Sociedad Anónima de Capital Variable, pero en nada se manifestó a la petición que mi representada le formuló formalmente y por escrito.'

"De la demanda de mérito conoció el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien mediante el citado auto de treinta y uno de diciembre de dos mil trece, la desechó tras considerar la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, por las razones que expresamente invocó, la licitación constituye un procedimiento seguido en forma de juicio para los efectos del juicio de amparo y tanto la convocatoria de la licitación impugnada como la Junta de aclaraciones de veintiuno de diciembre de dos mil trece, son actos intermedios que no ponen fin a dicha licitación.

"En esa tesitura, determinó, para que proceda el juicio de garantías, era necesario que la quejosa reclamara la resolución que pusiera fin a la licitación de referencia y en su caso, agotar el principio de definitividad sobre ésta.

"Inconforme con el acuerdo referido, la quejosa interpuso el recurso de queja que hoy se resuelve, cuyos motivos de agravio como se dijo, son infundados.

"Lo anterior, toda vez que, adverso a sus estimaciones, deviene correcta la aplicación en la forma indicada por el Juez de Distrito, de la jurisprudencia 22/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para desentrañar que la licitación sí constituye un procedimiento seguido en forma de juicio para los efectos del juicio de amparo, como se advierte de su contenido:

"'PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.—La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha

Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión «procedimiento en forma de juicio», comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo.'

"La citada jurisprudencia surgió de la contradicción de tesis 39/2000-PL, de entre las sustentadas por sendos Tribunales Colegiados de Circuito, y si bien en dicha contradicción se determinó si la orden de visita domiciliaria con fines de verificación fiscal forma parte de la visita misma y, por tanto, puede impugnarse hasta que sobreviene la resolución con que culmina el procedimiento, y si el amparo indirecto es improcedente en contra del acta parcial de inicio de la visita domiciliaria; cierto es también que, en ésta igualmente se abordó y dilucidó la problemática que se presentó ante el Juez de Distrito, consistente en si cuando el acto reclamado emane de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, oportunidad en la que cabe impugnar ésta, así como las violaciones del procedimiento.

"De ahí incluso, que al resolver la contradicción de mérito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió, además de la jurisprudencia de previa mención, las diversas de rubros: 'ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL. ES IMPUGNABLE EN AMPARO AUTÓNOMAMENTE, POR NO FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO EN QUE SE DESENVUELVE LA VISITA.' y 'ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.'; es decir, además abordó y se pronunció sobre el específico tema relativo a que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva.

"En ese tenor, de la ejecutoria de mérito, y en el descrito tema, se sentaron los lineamientos que rigen en lo específico, los cuales sustentan la mencio-

nada jurisprudencia en que correctamente respalda su determinación el Juez de Distrito.

"En efecto, al respecto, la indicada Sala de ese Alto Tribunal del País, luego de hacer referencia a diversos aspectos con relación al tema de la procedencia del amparo, expuso que cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que éste sólo es procedente en contra de la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente pues, si bien los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, aunque ello acontezca, dicho amparo sólo procede, como regla general, cuando sobreviene la definitiva, de ahí que el quejoso debe esperar ésta, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones de procedimiento.

"Así, expuso, si la regla general, como se dijo, es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de tal sistema –visto sobre lo ordinario– radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad.

"Por tanto, razonó, si esa es la razón del sistema legal, debe considerarse que también opera en ese caso de estudio, pues la misma necesidad de expeditez o desembarazo se da tanto en los juicios o procesos formales como en los procedimientos administrativos seguidos en sede administrativa, independientemente de que se trate de que la autoridad deba decidir una controversia entre partes contendientes, o que simplemente se limite a seguir el trámite legal establecido para dar audiencia a un particular, máxime si se toma en cuenta que la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo por ser de orden público, de modo que en este aspecto opera, por mayoría de razón, la misma regla que para los procedimientos formales, como para los civiles.

"Además, razonó que no hace la distinción que se le atribuye entre procedimientos donde la autoridad administrativa no jurisdiccional dirime un litigio entre partes contendientes, y aquéllos en donde solamente sigue un trámite procedimental frente a un particular en preparación de su resolución, por lo que al no establecer distinción de trato, debe entenderse, que comprende a todos ellos.

"Agregó que adoptar la interpretación contraria produciría en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración

pública en el campo donde actúa frente a los particulares, cuando lo hace a través de procedimientos, trabas que se tendrían sin ninguna necesidad, en virtud de que a través del amparo, con motivo de la resolución definitiva se reparan todas las violaciones.

"De ahí que en específico sobre ese punto jurídico, concluyó que cuando se establece que el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por 'procedimiento en forma de juicio' deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también, todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia.

"Luego, abordó ya el diverso tema, relativo a si la orden de visita domiciliaria de carácter fiscal forma parte del procedimiento que se desarrolla en la visita y, por tanto, sólo puede impugnarse en amparo hasta que sobreviene la resolución definitiva, o bien, si puede ser impugnado autónomamente.

"En ese orden de ideas, deviene que, como se dijo, es correcta la determinación del Juez de Distrito, al atender en la forma que lo hizo, a la jurisprudencia de mérito pues, como ya se expuso, si bien la oportunidad del Alto Tribunal del País para pronunciarse al respecto, emanó de la problemática generada en torno a la visita domiciliaria; resulta innegable que sentó las bases y así determinó, que cuando se establece que el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por 'procedimiento en forma de juicio' deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia.

"Razonamientos los anteriores que se plasman en la indicada jurisprudencia 22/2003, emitida de manera autónoma a las diversas sustentadas al resolver esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de mérito; jurisprudencia la cual de manera autónoma a los otros temas resueltos, rige sobre las situaciones jurídicas relativas a la comprensión de los procedimientos en forma de juicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo; de ahí que, como se expone, sea válida y acertada su cita por el Juez de Distrito.

"Es decir, cuando a través de ésta, expresamente se ha determinado que por 'procedimiento en forma de juicio' deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también, todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia.

"En ese tenor, devienen ineficaces las diversas manifestaciones de la parte recurrente, tendentes a sostener, por las razones que indica, que el procedimiento de licitación no lo es tal para efectos de la procedencia del amparo, cuando, como quedó demostrado, para ello, los procedimientos en forma de juicio deben entenderse con amplitud y no limitarse a aquellos en que se decida una controversia o se brinde la garantía de audiencia, sino también, todos aquellos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con esa garantía.

"Sin que devenga benéfico para la parte recurrente, el que, a fin de apoyar sus consideraciones y a manera de exclusión, aluda que en el caso de la licitación no se cumple con la garantía de audiencia, sino sólo se trata de un acto de la elección del concursante idóneo para celebrar el contrato, y en donde no hay controversia.

"Lo anterior, toda vez que, con independencia de que en específico ello acontezca en el procedimiento de licitación, cierto es que se advierte la Suprema Corte al expresarse al respecto en el sentido conocido, realizó la precisión relativa a la 'garantía de audiencia', a manera de abundar; es decir, para exponer que los procedimientos en forma de juicio deben entenderse con amplitud, incluso en aquél que se lleve a cabo a fin de respetar la citada garantía de audiencia; de lo cual se desprende que, con mayor razón, lo será aquel en el que la autoridad administrativa, en el ejercicio de sus funciones y conforme a la especifica normatividad, convoca a los gobernados, y para ello inicia y lleva a cabo, un procedimiento basado en la ley, a fin de emitir su determinación respecto de con quien contratar, lo que definitivamente prepara su determinación y la cual involucra a los gobernados.

"Además, debe tomarse en cuenta que, como lo razonó ese Alto Tribunal del País, no se hace la distinción que se le atribuye entre procedimientos donde la autoridad administrativa no jurisdiccional dirime un litigio entre partes contendientes, y aquellos en donde solamente sigue un trámite procedimental frente a un particular en preparación de su resolución, por lo que al no establecer distinción de trato debe entenderse que comprende a todos ellos.

"Así, es relevante que, como lo sostuvo el Juez de Distrito en su resolución, la licitación efectivamente constituye un procedimiento en el que la autoridad a través de las diversas etapas que puntualmente describió, concluirá con éste, siendo que el relativo a la licitación *per se*, su convocatoria y la Junta de aclaraciones no lo son, pues ellos son actos intermedios.

"Esto es, habida cuenta que la licitación pública que termina con la contratación, es un conjunto de actos tendentes a formalizar la actividad contractual del Estado, que se denomina procedimiento administrativo; cuya naturaleza jurídica consiste en el llamado que la administración pública hace a los particulares de manera impersonal, para que formulen sus ofertas, a fin de llevar a cabo la contratación, el cual constituye un procedimiento seguido en forma de juicio para los efectos del juicio de amparo, en atención a que, según establece el artículo 134, constitucional, que invoca la inconforme; el otorgamiento que hace el Estado para una concesión de prestación de servicios de cualquier naturaleza, está precedida del citado procedimiento específico de licitación pública, el cual busca asegurar al Estado las mejores condiciones, efectuado a través de convocatoria pública para que se presenten las respectivas proposiciones; lo cual, como se expone, concluye con una determinación y, sin duda alguna, involucra a los gobernados.

"Lo que guarda congruencia con lo sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de las tesis I.4o.A.586 A, I.4o.A.587 A y I.4o.A.588 A, consultables respectivamente en las páginas 2653, 2652 y 2651, del Tomo XXVI, julio de 2007, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que se comparten (la última invocada también por el Juez Federal), de rubros y textos:

"'LICITACIÓN PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA.—La licitación pública consiste en un llamado que la administración pública hace a los particulares de forma impersonal para que le formulen ofertas a fin de llevar a cabo una contratación, lo que, de acuerdo con la doctrina, tiene dos consecuencias: a) Quien se presenta y formula una oferta debe ajustarse estrictamente a las condiciones fijadas en el llamado, quedando obligado a mantenerlas durante el plazo que en éste se establezca; y, b) La administración puede aceptar o rechazar las ofertas que se le hagan, sin responsabilidad alguna, siempre y cuando respete la legalidad del procedimiento. Así, aquel llamado implica un conjunto de actos que conforman un procedimiento preparatorio de la actividad contractual del Estado, por lo que la naturaleza jurídica de la licitación pública es la de un procedimiento administrativo integrado por una diversidad de actos administrativos y simples actos de la administración, como formas jurídicas preparatorias de su actividad contractual, de manera que su omisión invalida los contratos produciendo su nulidad absoluta o de pleno

derecho, la que pueden invocar la propia administración, el particular contratante y los terceros interesados.'

"'LICITACIÓN PÚBLICA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN SU DESARROLLO CRONOLÓGICO.—El procedimiento administrativo de licitación pública, en su desarrollo cronológico, constituye una concatenación de actos desplegados en las siguientes etapas: I. El pliego de condiciones conforme al cual se hace el llamado a los interesados; II. La presentación de ofertas; y, III. El estudio de éstas por la administración, que culmina con la aceptación de la más conveniente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes (conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) a través de un fallo y su notificación al interesado. En esta última etapa debe establecerse cuáles son los derechos de los participantes en la licitación que no resultaron ganadores, si es que les asiste alguno, pues aunque no tienen derecho a la adjudicación, sí lo tienen a la participación en una competencia justa. En este sentido, conviene precisar que en caso de existir actos que vicien el procedimiento de licitación, los participantes cuentan con medios de impugnación para la defensa de su interés legítimo, el que debe entenderse como la facultad para lograr que la actuación administrativa se adecue a la ley, aunque no derive en un beneficio para ellos.'

"'LICITACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIOS ESENCIALES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO.—El procedimiento administrativo de licitación se rige por los siguientes principios esenciales: 1) Concurrencia, que asegura a la administración pública la participación de un mayor número de ofertas, lo cual permite tener posibilidades más amplias de selección y obtención de mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, entre otras; 2) Igualdad, que es la posición que guardan los oferentes frente a la administración, así como la posición de cada uno de ellos frente a los demás; 3) Publicidad, que implica la posibilidad de que los interesados conozcan todo lo relativo a la licitación correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas; y, 4) Oposición o contradicción, que deriva del principio de debido proceso que implica la intervención de los interesados en las discusiones de controversia de intereses de dos o más particulares, facultándolos para impugnar las propuestas de los demás y, a su vez, para defender la propia.'

"Idéntico criterio se sustentó por este tribunal al resolver el recurso de queja 69/2013-II, en sesión plenaria de veinte de junio de dos mil trece.

"Luego, al haberse determinado correcto el criterio del Juez Distrito, en el sentido de que se actualiza la causa de improcedencia que indicó; no es

posible sostener el argumento que afirma en su segundo agravio, relativo a que, no se tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, que dice:

"'Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"'...

"'III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

"'...

"'b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.'

"Lo anterior es así, habida cuenta de que, esa norma y fracción sí fue (sic) observada por el juzgador, pero en su diverso inciso a), que dice:

"'Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"'...

"'III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

"'a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de éstas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución.'

"Norma la anterior, cuya aplicación se estimó correcta, por las razones que se expusieron, y en esa medida, por exclusión, no resulta aplicable la que invoca (inciso b), puesto que, se reitera, el Alto Tribunal ya determinó que cuando se trata de actos procedimentales, el amparo sólo procede en contra de la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente, y si bien los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, aunque ello acontezca, dicho amparo sólo procede, como regla general, cuando sobreviene la definitiva; de ahí que el quejoso debe esperar ésta, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones de procedimiento.

"De ahí que las violaciones que dice se cometieron al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad convocante, se negó a contestar las preguntas formuladas por escrito, que le fueron entregadas en el acto de la Junta de aclaraciones, así como a proporcionar los estudios, planos y proyectos a que se encuentra obligada por la ley común, a fin de cumplir con la garantía de información contenida en el artículo 134 del mismo ordenamiento, en relación con la presentación de ofertas solventes dentro del procedimiento licitatorio; lo que a su juicio le impide su participación, con la consiguiente transgresión al derecho al trabajo; no pueden considerarse como de imposible reparación, pues amén de que no existe constancia que demuestre que se le haya dejado fuera del procedimiento de licitación, sino que, al no haberse dictado la resolución definitiva, por el momento, se encuentra dentro del mismo; de actualizarse los supuestos que afirma, podrán ser reparables, en su caso, al reclamar la resolución definitiva.

"Finalmente, debe decirse que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012 en que pretende apoyar los argumentos recién expuestos, no resulta aplicable, en razón de que, se refiere a un supuesto diferente al aquí analizado, como es el relativo a la clausura, como se advierte de su título del siguiente tenor:

"'CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'

"En mérito de las consideraciones expuestas, ante lo infundado de los agravios expuestos, se impone confirmar el acuerdo recurrido.

"Por lo expuesto y fundado se resuelve:

"PRIMERO.—Se confirma el acuerdo dictado el treinta y uno de diciembre de dos mil trece por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, dentro del juicio de amparo indirecto 1944/2013.

"SEGUNDO.—Se desecha la demanda de garantías promovida por ********** (sic) **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados de las autoridades que señaló como responsables, indicadas en el auto recurrido."

SEXTO.—**Determinación de la existencia de la contradicción de tesis.** Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál es la postura que debe prevalecer como jurisprudencia.

Para ello es menester indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar en la jurisprudencia P./J. 72/2010,[18] los artículos 107, fracción XIII,[19] de la Constitución Federal y 197A[20] de la Ley de Amparo, abrogada 227, fracción III,[21] de la vigente, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El citado criterio establece lo siguiente:

---

[18] Novena Época. Registro digital: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7.

[19] "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

[20] "Artículo 197 A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

[21] "Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan 'tesis contradictorias', entendiéndose por 'tesis' el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: 'CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.', al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que 'al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes' se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en 'diferencias' fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica

---

"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

La Suprema Corte definió que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, pues basta para estimar su existencia que los criterios jurídicos sean opuestos, debiendo ponderarse, en su caso, que la variación o diferencia en las cuestiones de hecho, que puedan existir no incidan o sean determinantes para el problema jurídico resuelto, esto es, que se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifiquen la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que formen parte de la historia procesal del asunto de origen.

También especificó que, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque el criterio jurídico se construye partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto que, no puede arribarse a un criterio único ni tampoco es posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues ello implicaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

De lo dicho, se puede concluir que para poder determinar si existe una contradicción de tesis, debe verificarse lo siguiente:

a) Que los órganos contendientes sostengan tesis contradictorias, debiéndose entender por tesis el criterio adoptado con arbitrio judicial y a través

de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar una determinada resolución; y

b) Que los criterios sean discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean iguales.

De acuerdo con lo anterior, este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, concluye que en el caso, sí existe la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de seis de mayo de dos mil catorce, resolvió el recurso de queja 63/2014.

De acuerdo con los antecedentes del asunto, se desprende que la demanda de amparo se promovió contra actos del director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Nuevo León y subdirector de Obras del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Nuevo León, de quienes reclamó lo siguiente:

"a) La OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS DE SU COMPETENCIA, dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"b) La OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO DE AUTORIDAD, dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"c) La OMISIÓN de especificar los servicios a contratar dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"d) El acto UNILATERAL Y ARBITRARIO, para reservarse información dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"e) La OMISIÓN de señalar las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"f) La OMISIÓN de señalar el volumen de obra dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"g) La AUSENCIA TOTAL DE FUNDAMENTACIÓN, para publicar el resumen de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y señalar el mismo día para la visita de las instalaciones dentro de la licitación ********** y **********, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"h) La AUSENCIA TOTAL DE MOTIVACIÓN, para publicar el resumen de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación y señalar el mismo día para la visita de las instalaciones dentro de la licitación ********** y **********, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"i) La OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS DE SU COMPETENCIA, dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el diario oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"j) La OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO DE AUTORIDAD, dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"k) La OMISIÓN de especificar los servicios a contratar dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"l) El acto UNILATERAL y ARBITRARIO, para reservarse información dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"m) La OMISIÓN de señalar las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"n) La OMISIÓN de señalar el volumen de obra dentro del resumen de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013.

"o) La OMISIÓN de recibir la petición que le formuló **********, S.A. de C.V., en forma pacífica y respetuosa el día 24 de diciembre de 2013, respecto de la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013; y

"p) La OMISIÓN de recibir la petición que le formuló **********, S.A. de C.V., en forma pacífica y respetuosa el día 24 de diciembre de 2013, respecto de la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013."

El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a quien correspondió conocer del asunto, decidió desechar la demanda al estimar actualizada la causa de improcedencia del juicio de amparo establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, ya que consideró que los actos reclamados son intermedios dentro del procedimiento de licitación, por lo que era necesario esperar a que la parte quejosa reclamara la resolución que ponga fin a la licitación y, en su caso, agotar el principio de definitividad.

Al realizar el estudio de los agravios –hechos valer contra el desechamiento de la demanda–,[22] el tribunal de referencia, sostuvo que de la interpretación de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal, así como 1o., 5o., fracción I, 61, fracción XXIII, 107, fracción III, incisos a) y b), y 117 de la Ley de Amparo, se podía advertir que la reforma constitucional introdujo dos aspectos importantes: 1. La institución protectora de los derechos fundamentales, incluso, por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, 2. La procedencia del juicio de amparo en contra de actos omisivos.

Expuso que, en lo concerniente a los actos omisivos, el legislador federal estableció la procedencia del juicio de amparo en su contra y, precisó que: "… ***el presente estudio necesariamente debe versar en el análisis integral con este tipo de actos en conjunción con la impugnación de los actos en los que se aducen puramente violaciones directas a la Constitución Federal, sin necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación común, ni esperar a la resolución final del procedimiento*** …".[23]

---

[22] Fojas 53 a 69 del expediente en que se actúa.
[23] Lo destacado con negrillas es por parte de este Pleno.

Posterior a ello, explicó, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que rige el acto que se reclama prevé la procedencia de un juicio, recurso o medio de defensa, virtud al cual pueda ser revocado, modificado o nulificado, asimismo, que de conformidad con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Federal, dicha regla acepta como excepción los casos en que el acto reclamado carezca de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución.

Después de analizar el contenido de la demanda de garantías, sostuvo que se actualizaba el supuesto de excepción, porque la quejosa se dolió de una violación directa a la Constitución, como lo era la ausencia total de fundamentación y motivación, por lo que, hasta ese estadío procesal, no se surtía la causa de improcedencia que sostuvo el juzgador;[24] y, especificó que: "… *cuestión contraria hubiese sucedido si la quejosa paralelamente a las violaciones directas a la Constitución hubiese alegado violaciones indirectas o de legalidad, aspecto en el que se encontraba obligada a agotar los medios de defensa que establezcan las leyes secundarias relativas y esperar a la emisión final del procedimiento* ...".

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa indicó, nuevamente, que de la lectura integral de la demanda de amparo que digitalizó en su fallo, se advertía que la quejosa en sus conceptos de violación adujo infracciones directas a la Constitución, porque argumentó que los actos se realizaron omitiendo en forma total la fundamentación de los preceptos legales aplicables, lo que la dejó en completo estado de indefensión, asimismo, que los reclamos están encaminados y circunscritos a poner en evidencia la violación a sus derechos fundamentales; es decir, violaciones directas a la Carta Magna.

De ahí, concluyó que, no era necesario que antes de acudir al amparo la quejosa agotara los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, porque sería contrario a los principios de derecho, el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de un acto carente de la debida fundamentación, cuya obligatoriedad impugna por conceptuarlo contrario a los textos de la Constitución.

A mayor abundamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito, señaló que fue incorrecta la determinación del Juez, en el sentido de que se actualiza la

[24] Fojas 65 vuelta del expediente en que se actúa.

causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por no haberse impugnado la determinación final en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, porque de acuerdo con lo establecido previamente, se advertía que los planteamientos propuestos en cada uno de los conceptos de violación son referidos a violaciones directas a la Constitución y, específicamente, respecto de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que su reclamo procedía en forma directa, mediante la acción constitucional, sin necesidad de esperar a la emisión final del acto administrativo.

Finalizó diciendo que, al dolerse fundamentalmente de que la responsable fue omisa en citar los fundamentos legales, entonces, se trata de actos dictados dentro del procedimiento que se tornan de imposible reparación, al señalarse afectación material de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, ello de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; y que, dicha determinación no prejuzgaba sobre la fundamentación del acto, porque la autoridad responsable en términos del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, al rendir su informe justificado deberá complementar esos aspectos.

En resumen, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, determinó que el juicio de amparo indirecto resultaba procedente, porque en los conceptos de violación se plantearon violaciones directas a la Constitución, por lo que no era necesario esperar al dictado de la resolución final dentro del procedimiento de licitación, pues esos actos resultaban de imposible reparación al señalarse una afectación de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de doce de julio de dos mil doce, resolvió el amparo en revisión 154/2012-III.

Del capítulo de resultandos de esa sentencia, se desprende, que la parte quejosa reclamó del secretario de Obras Públicas de Monterrey, Nuevo León, y otras autoridades de ese Ayuntamiento, lo siguiente:

"IV. Actos reclamados:

"Del secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, Nuevo León.

"1) La OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS DE SU COMPETENCIA, dentro de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011.

"2) La OMISIÓN DE CITAR LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO DE AUTORIDAD, dentro de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011.

"3) La OMISIÓN de especificar el volumen de la obra a contratar de la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011.

"4) La OMISIÓN de especificar los servicios a contratar en la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011.

"5) La OMISIÓN de indicar los medios que se utilizarán para la realización de la obra mencionada en la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011; y

"6) El acto UNILATERAL y ARBITRARIO, para reservarse información en la convocatoria a la licitación **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2011.

"De las responsables referidas en los incisos 2) al 16) (sic), las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas de los actos reclamados por nuestra representada."

En la sentencia de primera instancia, el Juez Federal que conoció del asunto sobreseyó en el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo,[25] en virtud de que consideró la parte quejosa debía esperar a que se dictara el auto de adjudicación del procedimiento de licitación pública para, entonces, impugnarla a través de los juicios o medios de defensa que considerara oportunos, asimismo, porque el acto reclamado sólo produjo efectos intraprocesales, cuyas dimensiones no eran exorbitantes ni con ellas se afectó a las partes en grado predominante o superior, porque las consecuencias eran susceptibles de extinguirse con la

[25] Ley de Amparo abrogada.

resolución definitiva que se pronunciara en el acta del fallo dentro del procedimiento de licitación, en caso de ser favorable.

Al realizar el estudio de los agravios, dicho órgano colegiado los consideró infundados e inoperantes.

Sostuvo que la decisión del Juez fue correcta, porque los actos reclamados no eran impugnables mediante el juicio constitucional, porque consistían en la etapa inicial de un procedimiento administrativo de licitación pública, el cual es seguido en forma de juicio.

Después de definir "licitación pública" y de explicar sus fases procedimentales, concluyó que la licitación pública es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.", tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general –salvo algunas excepciones–, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento; por lo que, era válido el sobreseimiento resuelto por el Juez: "... *al constituir el acto reclamado (publicación de la convocatoria de licitación pública **********), uno intraprocesal dentro de un procedimiento administrativo (licitación pública), seguido en forma de juicio* ..."

Posteriormente, el órgano colegiado resolutor declaró inoperantes los agravios en los que la parte recurrente adujo que el Juez fue omiso en analizar el fondo de sus conceptos de violación, en los que hizo valer violaciones directas a la Constitución, pues estimó que eran aspectos ajenos a la litis que no fueron materia de pronunciamiento por el Juez Federal, con los que además no combatía la causa de improcedencia que estimó actualizada el Juez de amparo. Asimismo, declaró inoperantes los restantes agravios al considerar que las alegaciones propuestas resultaban meras especulaciones, respecto de lo resuelto en un diverso fallo.

De la lectura de esa sentencia, se advierte que el criterio jurídico que sostuvo dicho Tribunal Colegiado, con apoyo en la interpretación que hizo de

la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que el proceso de licitación pública constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que, cuando se reclama la publicación de la convocatoria, el juicio de amparo es improcedente, ya que se trata de un acto intraprocesal que debe reclamarse hasta que se dicte la resolución final.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de trece de febrero de dos mil catorce, resolvió el recurso de queja 12/2014.

De acuerdo con los antecedentes relevantes del caso que fueron descritos en el considerando quinto de dicha resolución, se advierte que la parte quejosa compareció a promover demanda de amparo indirecto contra actos del presidente y diversas autoridades del Municipio de Lampazos de Naranjo, Nuevo León, de quienes reclamó la licitación pública, su convocatoria y la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil trece, contenida en la denominada "acta de Junta de aclaraciones", mediante la cual, dijo, se le negó expresamente la información solicitada a efecto de preparar una oferta solvente y, por ende, la negativa a poder participar en dicha licitación pública.

También, narró como antecedentes, que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, facción III, inciso a), de la Ley de Amparo, desechó la demanda de garantías promovida contra actos que se identificaron como la convocatoria de licitación pública, la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil trece contenida en el acta de Junta de aclaraciones, así como la negativa para participar en la licitación, porque consideró que la licitación constituía un procedimiento seguido en forma de juicio y, tanto la convocatoria de licitación como la Junta de aclaraciones eran actos intermedios que no ponían fin al procedimiento.

Al hacer el estudio de los agravios, el tribunal los calificó de ineficaces, básicamente, por lo siguiente:

a) De acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO

AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.", se dilucidó la problemática que se presentó ante el Juez de Distrito, consistente en si cuando el acto reclamado emana de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, oportunidad en la que cabe impugnar ésta, así como las violaciones al procedimiento.

b) La Segunda Sala del Alto Tribunal sentó el criterio de que cuando se trata de actos procedimentales, la regla general, es que éste sólo es procedente en contra de la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente pues, si bien, los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, aunque ello acontezca, el amparo sólo procede, como regla general, cuando sobreviene la definitiva, de ahí, que el quejoso debe esperar ésta y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones de procedimiento.

c) La determinación del Juez era correcta, al atender la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, porque ahí se sentaron las bases y se determinó que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, y ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también, todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia.

d) La licitación efectivamente constituye un procedimiento administrativo en el que la autoridad a través de diversas etapas que puntualmente desarrolle, concluirá con una contratación, por lo que su convocatoria y la Junta de aclaraciones son actos intermedios.

e) Por exclusión, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, porque el Alto Tribunal ya determinó que cuando se trata de actos procedimentales, el amparo sólo procede en contra de la resolución con que tales actos culminen, definiendo la situación jurídica correspondiente y, si bien, los actos procesales aislados anteriores a

la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, aunque ello acontezca, dicho amparo sólo procede, como regla general, cuando sobreviene la definitiva.

f) Las violaciones que se dicen cometidas al artículo 8o. de la Constitución, no son actos de imposible reparación porque, en el caso específico, no existe constancia que demuestre que a la parte quejosa se le dejó fuera del procedimiento de licitación, sino que, al no haberse dictado la resolución definitiva, por el momento, se encuentra dentro de éste.

Las anteriores consideraciones dejan ver que el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es que, por regla general, las violaciones procesales cometidas en los procedimientos de licitación pueden ser impugnados hasta que se dicte la resolución final, porque se trata de procedimientos que por su naturaleza son seguidos en forma de juicio para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

De los antecedentes de los asuntos, se desprende que ante los tres Tribunales Colegiados de Circuito se hicieron planteamientos semejantes, pues en todos se reclamaron actos intermedios dentro de un procedimiento de licitación.

El Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa de este circuito, resolvieron el tema sometido a su análisis en vía de recurso de queja, en tanto que, el Segundo Tribunal, lo hizo al estudiar una sentencia en amparo en revisión.

Al decidir sobre la procedencia del juicio de amparo, los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, determinaron que no procedía el reclamo de tales actos intermedios del procedimiento de licitación en la vía de amparo indirecto, sino hasta que se dictara la resolución final del procedimiento respectivo; mientras, el Primer Tribunal de la misma materia y circuito, estableció que el juicio de amparo era procedente, porque dado la manera de su reclamo, se trataba de actos de imposible reparación, pues el quejoso alegó que eran violaciones directas a la Constitución.

Entonces, si la premisa de la cual partieron en el estudio de los asuntos los tres órganos colegiados, es la misma, resulta que se trata del mismo

punto de derecho controvertido, de cuyo resultado, los tribunales en conflicto llegaron a conclusiones distintas, pues mientras dos tribunales decidieron que el juicio de amparo era improcedente contra actos intermedios de un procedimiento de licitación, sin importar el carácter positivo y omisivo que se les atribuyó, el otro órgano jurisdiccional consideró que la acción de amparo era procedente, porque el acto intermedio del procedimiento de licitación tenía el carácter de omisivo y se alegó que se trata de una violación directa a la Constitución, respecto del cual opera una excepción al principio de definitividad, por lo que esa circunstancia, es suficiente para admitir la demanda.

Por tanto, este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, considera que, como se anticipó, sí existe la contradicción de criterios denunciada, cuya materia deberá abordar las características del procedimiento de licitación, así como las reglas que sobre la procedencia del juicio de amparo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los actos administrativos seguidos en forma de juicio, para finalmente establecer si es procedente el juicio biinstancial en contra de los actos intermedios que se reclamen, determinando el momento procesal para analizarlo dependiendo si en el reclamo se alegan violaciones directas a la Constitución, o bien, se les atribuye el carácter de actos positivos u omisivos.

Lo anterior, para definir los dos puntos de contradicción que se advierten de los criterios en conflicto y que se sintetizan de la siguiente manera:

a) Determinar si el juicio de amparo indirecto, por regla general, resulta improcedente contra actos intermedios en un procedimiento administrativo de licitación, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), aplicado este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con independencia del carácter positivo u omisivo que le atribuya el quejoso, así como de la manifestación que al respecto realice de que constituyen una violación directa a la Constitución.

b) Determinar si en el auto inicial de trámite a la demanda de amparo, es el momento oportuno para pronunciarse sobre la afectación a derechos sustantivos, por alegarse violaciones directas a la Constitución, a fin de resolver sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos intermedios en un procedimiento de licitación, ya sean omisivos o positivos, es decir, si se surte de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), aplicado este último a contrario sensu, en relación con el 113, todos de la Ley de Amparo.

SÉPTIMO.—Criterios jurídicos que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia. Por cuestión de método en la exposición y para mayor precisión en el entendimiento de los criterios que habrán de prevalecer, en primer lugar se hace necesario explicar las características del procedimiento de licitación pública, asimismo, destacar cuáles son las reglas que el Alto Tribunal ha establecido en relación con la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de un procedimiento seguido en forma de juicio.

Pues bien, el artículo 134, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución, establece:

"Artículo 134.

"...

"Las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

"Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado."

De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el otorgamiento que hace el Estado para una concesión de prestación de servicios de cualquier naturaleza, está precedida de un procedimiento específico denominado licitación pública, cuya finalidad es asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, efectuado a través de convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes.

Ahora bien, también debe tenerse presente que en la doctrina, cuya remisión ha sido autorizada por el Máximo Tribunal del País, siempre que se

haga de manera objetiva y racional,[26] la licitación pública, es definida como un procedimiento de concurso mediante convocatoria pública, a través del cual, la entidad o dependencia administrativa recibe y analiza propuestas presentadas por los concursantes para la ejecución de una obra o la adquisición de bienes y servicios, con el objeto de escoger aquella que garantice las mejores condiciones para el Estado.[27]

De lo anterior, deriva que a través del procedimiento de licitación, la administración pública –federal, estatal o municipal–, elige a la persona física o moral, que le ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia, eficacia y honradez, para celebrar un contrato determinado que otorgue la concesión de un servicio y para ello, hace un llamado a los particulares a fin de que formulen sus ofertas para llevar a cabo la contratación –en términos igualitarios–, y una vez que se evalúen las propuestas seleccionadas –lo que indica un proceso de selección y calificación–, se resuelva a qué particular se considera idóneo

---

[26] "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.—En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que 'En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.'; mientras que en su párrafo tercero dispone que 'En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.'. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen." (Tesis aislada 2a. LXIII/2011; Novena Época; 2a. Sala; *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*; Tomo XIII, mayo de 2001; página 448)

[27] Castrejón García, Gabino Eduardo. *Derecho Administrativo*. 4a. ed. México, Cárdenas Velasco Editores, 2010, página 368.

como sustituto de la administración pública, para prestar un servicio a la población.

Por otra parte, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es el ordenamiento de carácter público que tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el título segundo de tal normatividad, se regulan los procedimientos de contratación. En lo que al caso de estudio importa, los artículos 26, 29, 30, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37 y 37 Bis, disponen:

"Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

"I. Licitación pública;

"II. Invitación a cuando menos tres personas, o

"III. Adjudicación directa.

"Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley.

"Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera, deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la presente ley.

"En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.

"En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

"Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias y entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado.

"Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

"La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.

"Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

"A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

"La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determi-

nará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados."

"Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener:

"I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

"II. La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;

"III. La fecha, hora y lugar de celebración de la primera Junta de aclaración a la convocatoria a la licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las proposiciones;

"IV. El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine la convocante;

"V. Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;

"VI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

"VII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él;

"VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta ley;

"IX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes;

"X. Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse, de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

"XI. La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;

"XII. La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;

"XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio;

"XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la presente ley;

"XV. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá

la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, y

"XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 45 de esta ley.

"Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

"Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y entidades podrán difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.

"Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto."

"Artículo 30. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria."

"Artículo 33 Bis. Para la Junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:

"El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido por un representante del área técnica o

usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

"Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

"Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de aclaraciones.

"Al concluir cada Junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores Juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

"De cada Junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última Junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia."

"Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

"La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

"Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso

de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

"Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

"Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

"Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento de la Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada ley, para que resuelva lo conducente.

"Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto."

"Artículo 35. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:

"I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

"II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, y

"III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

"Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, después de la evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes."

"Artículo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación.

"En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

"Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.

"Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así

como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

"Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada. En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas."

"Artículo 36 Bis. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso:

"I. La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien, de costo beneficio;

"II. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante, y

"III. A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente.

"Para los casos señalados en las fracciones I y II de este artículo, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

"De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo que

se realice en términos del reglamento de esta ley. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá ser invitado al mismo.

"Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control de la dependencia o entidad de que se trate.

"Artículo 37. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

"I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla;

"II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;

"III. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;

"IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

"V. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y

"VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

"En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron.

"En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

"Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

"En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus proposiciones por ese medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.

"Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

"Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del título sexto, capítulo primero de esta ley.

"Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

"Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición."

"Artículo 37 Bis. Las actas de las Juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se

dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de referencia.

"Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal."

La relatoría de los anteriores preceptos, permite concluir que la licitación pública es un conjunto de actos que integran un procedimiento administrativo, con el cual la administración pública elige a una persona física o jurídica para celebrar un contrato por medio del cual le sean suministrados bienes o servicios, en las condiciones más convenientes para el Estado; es decir, es el procedimiento administrativo que el gobierno debe seguir para contratar de particulares insumos ya sea materiales o de servicios.

Así, se tiene que la licitación pública se integra por diversas etapas, a saber:

1) Publicación de la convocatoria.

2) Presentación de las ofertas o proposiciones.

3) Junta de aclaraciones.

4) Apertura de ofertas.

5) Adjudicación, y

6) Perfeccionamiento del contrato.

Derivado de lo anterior, resulta incuestionable que en el procedimiento de licitación pública, se emiten diversos actos tendientes a formalizar la actividad contractual del Estado; esto es, se lleva a cabo mediante una serie ordenada de actos procedimentales, concatenados entre sí, que permite la

contratación de bienes y servicios en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Esa concatenación de actos con un fin específico que implica la decisión final de la autoridad administrativa, permite afirmar que la naturaleza del procedimiento de licitación es equivalente a la de un "***procedimiento administrativo seguido en forma de juicio***".

En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003,[28] de rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.", estableció que tienen ese carácter aquellos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular,

[28] Novena Época. Registro digital: 184435. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XVII, abril de 2003, materia común, tesis 2a./J. 22/2003, página 196.
"PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR.—La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión 'procedimiento en forma de juicio', comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo."

prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia.

De dicho criterio jurisprudencial, obligatorio para este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, se obtiene que las licitaciones públicas sí participan de las características de los procedimientos seguidos en forma de juicio, pues mediante ellas se realizan los actos tendentes a formalizar la actividad contractual del Estado; y su naturaleza jurídica es la de un llamado que la administración pública hace a los particulares de manera impersonal, para que formulen sus ofertas, a fin de llevar a cabo dicha contratación.

Luego, ante el hecho irrefutable de que el procedimiento de licitación pública constituye un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, tanto por su naturaleza como por las etapas que lo constituyen, el estudio de la procedencia del juicio de amparo, por regla general, debe seguir las medidas que para tales tipos de actos establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

Al respecto, en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, a que se hizo referencia, el Alto Tribunal consideró, en esencia, que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales.

Así es, en la resolución que motivó el criterio a que se hace referencia determinó:

"Para llegar a esta conclusión se toma en consideración que cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente en contra de la resolución con que tales actos culminan definiendo la situación jurídica correspondiente; así consta, como ya se dijo, en el amparo directo, donde ordinariamente de acuerdo con el artículo 158 de la citada ley, el amparo no procede en contra de cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la sentencia definitiva o laudo que decide el juicio; la misma regla opera en relación con los actos de remate o de ejecución de sentencia ejecutoriada, pues conforme al artículo 114, fracción III, también aquí procede el amparo hasta la resolución definitiva o la que aprueba o desaprueba el remate. En todas estas hipótesis los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al

particular que interviene en el juicio o procedimiento, pero aunque ello acontezca, el amparo sólo procede, como regla general, cuando sobreviene la definitiva; el quejoso debe esperar ésta, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones de procedimiento.

"Si la regla general, como se dijo, es que cualquier violación procesal se guarde para hacerla valer en amparo hasta que se dicta la resolución definitiva, resulta obvio que la razón de tal sistema –visto sobre lo ordinario– radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo en contra de cada acto procesal para hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin desdoro de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad.

"Por tanto, si esa es la razón del sistema legal, debe considerarse que también opera en el caso a estudio, pues la misma necesidad de expeditez o desembarazo se da tanto en los juicios o procesos formales como en los procedimientos administrativos seguidos en sede administrativa, independientemente de que se trate de que la autoridad deba decidir una controversia entre partes contendientes, o que simplemente se limite a seguir el trámite legal establecido para dar audiencia a un particular, máxime si se toma en cuenta que la celeridad es fundamental en todo procedimiento administrativo por ser de orden público, de modo que en este aspecto opera, por mayoría de razón, la misma regla que para los procedimientos formales como para los civiles.

"A la misma conclusión se llega a través de la interpretación literal del párrafo que se analiza, pues no hace la distinción que se le atribuye entre procedimientos donde la autoridad administrativa no jurisdiccional dirime un litigio entre partes contendientes, y aquellos en donde solamente sigue un trámite procedimental frente a un particular en preparación de su resolución, por lo que al no establecer distinción de trato debe entenderse que comprende a todos ellos.

"Adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en el campo donde actúa frente a los particulares, cuando lo hace a través de procedimientos, trabas que se tendrían sin ninguna necesidad, en virtud de que a través del amparo con motivo de la resolución definitiva se reparan todas las violaciones.

"Por todo lo expuesto, se concluye que, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del

trabajo, emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por 'procedimiento en forma de juicio' deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia."

Como se aprecia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que cuando el amparo indirecto se promueve contra actos que forman parte de una secuela procesal a modo de juicio, tramitado no ante autoridades jurisdiccionales, sino ante autoridades netamente administrativas, el amparo no procederá, sino hasta que se dicte la resolución final de ese procedimiento, porque aun cuando el interesado pudiera estimar que los actos aislados o intermedios –ya sean de carácter positivo, o bien, omisiones– le deparan algún perjuicio, ello en realidad no acontece sino hasta que sobreviene la resolución definitiva, permitiendo en ese momento, la impugnación de las demás violaciones que se estiman cometidas durante el procedimiento.

Además, el objetivo de interpretar, en ese sentido, las reglas de procedencia del amparo indirecto en los procedimientos que se siguen en forma de juicio, es evitar la proliferación del juicio de amparo en contra de cada acto procesal, que en la práctica obstaculicen o dificulten el funcionamiento de la administración pública, porque es un hecho notorio, que la sustanciación y resolución de ese medio de control, en muchas ocasiones, propicia el alargamiento de las decisiones que debe realizar el Estado para la continuación de su actividad administrativa.

De ahí que, atendiendo las consideraciones descritas, si la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la consecución de una estructura ágil del juicio de amparo, que permita concentrar en un solo procedimiento el estudio del cúmulo de las violaciones procesales posibles, entonces, debe estimarse que la interpretación más acorde con ese propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esta naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la resolución final, sin menoscabo de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad.

Sentado lo anterior, ahora se hace necesario precisar las reglas generales y específicas que la normativa establece para la procedencia del juicio de amparo contra tales actos.

El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución."

Por su parte, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo vigente, señala:

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

"a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y

"b) Actos en el procedimiento, que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos substantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."

La transcripción anterior evidencia los siguientes elementos:

- La normativa constitucional prevé la procedencia del juicio de amparo en materia administrativa, respecto de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que causen un agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal, o bien, en la propia resolución que ponga fin al procedimiento respectivo.

- El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, prevé que el juicio biinstancial será procedente contra las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en el que se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante el transcurso del procedimiento cuando por virtud a ellas el quejoso quedó sin defensa y trascendieron al resultado del fallo, o bien, las que hubieran sido cometidas al momento de dictar la propia resolución.

- El mismo precepto y fracción, en su inciso b), dispone que el amparo indirecto también será procedente contra actos en el procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que éstos produzcan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, en interpretación del artículo 114, fracción II, en relación con la diversa IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuya esencia el legislador plasmó en el actual artículo 107, fracción III, incisos a) y b), razón por la que es oportuna su cita; que, no obstante la citada fracción IV del numeral 114, hiciera referencia a actos en el juicio, en igualdad de razón, debía aplicarse a los procedimientos seguidos en forma de juicio, ya que la esencia que trasciende, es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación, tienen la posibilidad de ser impugnados de inmediato, sin esperar a la resolución definitiva.

El criterio a que se alude, es del texto y rubro siguientes:

"PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY

DE AMPARO.—La fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que determina que tratándose de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, debe interpretarse en relación con la fracción IV del mismo precepto, que establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Aunque la fracción IV aluda a actos en el juicio, por igualdad de razón debe aplicarse a actos en procedimientos seguidos en forma de juicio pues lo que se pretende al través de ese precepto es que los actos que tengan una ejecución de imposible reparación puedan ser impugnados de inmediato en la vía de amparo sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y tales actos pueden producirse tanto en juicios propiamente dichos como en procedimientos seguidos en forma de juicio."[29]

De la tesis anterior se advierte, que resulta procedente el juicio de amparo indirecto, tratándose, como en el caso, de actos emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, bajo la condicionante que tengan una ejecución de imposible reparación, entendida como la afectación material a derechos sustantivos, en los que el acto de autoridad dejará huella en la esfera jurídica del gobernado.

Dicho concepto de irreparabilidad, respecto de derechos sustantivos, también fue analizado en el mismo sentido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a. 43, que dice:

"EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.—De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que

[29] Séptima Época. Registro digital: 237913. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, Volúmenes 133-138, Tercera Parte, materia común, página 81.

quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo."[30]

La argumentativa jurídica y fáctica expuesta lleva a determinar, que ante la naturaleza jurídica del procedimiento de licitación pública, dadas la etapas desarrolladas desde su inicio hasta su conclusión, es posible concluir que los actos emitidos durante su tramitación, conforman un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, respecto de los cuales, por regla general, no procede el amparo indirecto, pues deberán controvertirse hasta que se dicte la resolución final de ese procedimiento.

Esto es así, porque acorde con la exposición normativa y a la teoría jurisprudencial citada, es válido afirmar que, por un lado, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, establece una regla general de procedencia del juicio, la cual consiste en que, sólo se podrá reclamar en el amparo indirecto la resolución final con que culmine el procedimiento seguido en forma de juicio, en este caso, el de licitación pública, momento en el cual, el particular que se estima afectado podrá hacer valer las violaciones procesales que se hubieren cometido, o bien, las que se actualizaron con la emisión de esa determinación.

También, se puede sostener válidamente que, como excepción a esa regla general, el legislador estableció un segundo supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, al señalar que a través del amparo indirecto, podrán ser impugnados actos intermedios dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, **siempre que, tales actos, por su naturaleza, sean de imposible reparación**.

En consecuencia, cuando en un juicio de amparo indirecto, el acto reclamado se haga consistir en un acto intermedio dentro del procedimiento de licitación, será improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, con independencia del carácter positivo u omisivo que le atribuya el quejoso,

[30] Octava Época. Registro digital: 207343. Instancia: Tercera Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989, materia común, tesis 3a. 43, página 291.

así como de la manifestación que al respecto realice de que constituye una violación directa a la Constitución, pues el amparo promovido contra actos en un procedimiento seguido en forma de juicio, que puedan causar perjuicio al particular, aunque ello acontezca, por regla general, sólo procede contra la resolución definitiva que se dicte en ese procedimiento, donde podrán hacerse valer las violaciones que se estimen hubieren sido cometidas durante la sustanciación.

Salvo que en el juicio quede demostrado que tal acto sea de imposible reparación, entendiéndose por ello, que afecte materialmente en perjuicio del quejoso sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en cuyo caso, se actualizará el diverso supuesto de procedencia previsto por el legislador en la propia Ley de Amparo vigente, en el artículo 107, fracción III, inciso b).

Luego, es oportuno precisar que el análisis de procedencia contra ese tipo de actos dentro de un procedimiento de licitación seguido en forma de juicio, implica un examen detallado y ponderado sobre su naturaleza, lo cual no puede verificarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban, por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa, no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá necesariamente un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual deberá admitirla a trámite, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el estudio exhaustivo de esos supuestos, pues de otra manera consistiría un estudio superficial y a priori de los motivos aducidos como violaciones directas a la Constitución y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Así es, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

Debe entenderse que lo manifiesto, es lo que se advierte de manera clara y patente, y lo indudable, consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 145 de la Ley de Amparo abrogada, que prescribía la misma regla, sostuvo que su aplicación es de carácter excepcional, e implica, en términos generales, que los Jueces de Distrito no deben rechazar las demandas de amparo, sino que deben tramitarlas para dar oportunidad a que, mediante los informes justificados y las pruebas rendidas, puedan confirmarse o desvanecerse los motivos de improcedencia que pudieran actualizarse.[31]

---

[31] Novena Época. Registro digital: 166452. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXX, septiembre de 2009, materia común, tesis 1a./J. 63/2009, página 59.
"DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO EL QUEJOSO, QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, ADUCE TENER LA POSESIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DEL LITIGIO.—Si el quejoso aduce ser posesionario de un inmueble objeto de un litigio al que es extraño, no procede desechar su demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, aun cuando de las manifestaciones vertidas en ella parezca desprenderse que en realidad aquél sólo es un mero ocupante del inmueble y que, por ende, no tiene derechos posesorios que deban protegerse. Ello es así, porque el análisis para determinar la existencia del interés jurídico que legitime al quejoso para acudir a la vía constitucional implica cuestiones que son materia de prueba que habrán de seguir el trámite correspondiente, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión en tanto que no podría demostrar su dicho. Así, en la indicada hipótesis resulta aplicable el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 28/2005 de rubro: 'INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.', publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 245 y, por tanto, la demanda de amparo debe admitirse a trámite, y si no llega a probarse el hecho medular de la posesión, procederá sobreseer en el juicio de garantías por falta de interés jurídico. **Lo anterior, de acuerdo con el principio de que la improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de actos de autoridad que vulneren garantías individuales, y conforme a la postura reiterada de este Alto Tribunal, en el sentido de que las causas de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, lo cual implica que el citado artículo 145 es de aplicación estricta; esto es, cuando el motivo de improcedencia es manifiesto (que se advierta en forma patente y absolutamente clara) e indudable (que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza en el caso); o sea, cuando sea evidente, claro, fehaciente e indiscutible, lo que no ocurre en el supuesto analizado**."
Novena Época. Registro digital: 178431. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXI, mayo de 2005, materia civil, tesis 1a./J. 28/2005, página 245.
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.—Tratándose de una demanda de amparo interpuesta en contra de la orden de desalojo o lanzamiento de un inmueble como consecuencia de la sentencia definitiva que ordena su desocupación y entrega, respecto del cual el quejoso se ostenta como tercero extraño a juicio y aduce tener su posesión, **no procede desecharla por notoriamente improcedente, ante la falta de acreditamiento del interés jurídico del promovente, toda vez que ello deberá ser materia de prueba durante la secuela procesal del**

Orienta lo considerado la tesis 2a. LXXI/2002[32] emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.—El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el

---

juicio constitucional, pues la sola existencia de dicha orden hace inminente su ejecución, aun cuando se dirija a otra persona; en tal evento y de no existir otra causal de improcedencia evidente del juicio, **procede admitir y tramitar la demanda de amparo, ya que de otra forma el promovente quedaría en estado de indefensión, haciéndose nugatorios sus derechos al impedírsele demostrar los dos supuestos que integran el interés jurídico, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad**."

[32] Novena Época. Registro digital: 186605. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XVI, julio de 2002, materia común, tesis 2a. LXXI/2002, página 448.

juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."

De ahí que, cuando en la demanda de amparo relativa, la parte quejosa aduzca que los actos intermedios en el procedimiento de licitación constituyen violaciones directas a la Constitución, ya sea por el carácter positivo o negativo que se les atribuya, el Juez de Distrito no puede desechar de plano o en forma automática la demanda de amparo, porque no resulta factible, en ese momento procesal, desestimar *per se* las calificativas que inmersas en los conceptos de violación se dan a los actos, pues debe realizarse la verificación objetiva con vista a los hechos, para en todo caso determinar si esos actos son o no violatorios de los derechos sustantivos del particular.

Por ende, en congruencia con lo anterior, se debe atender que pueden imperar actos que efectivamente conllevan violaciones directas a derechos sustantivos, por eso, se considera que no se debe desechar por causa notoria y manifiesta de improcedencia, sino que, se debe admitir para determinar en la sentencia, con mayores elementos, sobre la procedencia o no del juicio de amparo, según se demuestre fehacientemente, la connotación que se atribuye a los actos como de imposible reparación, es decir, que se constate si verdaderamente esos actos positivos o negativos dentro del procedimiento que se afirma son violatorios directos de la Constitución, en realidad ocasionan el perjuicio irreparable en la esfera jurídica del quejoso.

Ello, porque al recibir la demanda, el juzgador sólo cuenta con los datos proporcionados por el peticionario del amparo, mismos que debe evaluar bajo el principio de que fueron expuestos bajo protesta de decir verdad; empero, una vez rendidos los informes justificados, las pruebas de las partes y demás actuaciones que integren el sumario de amparo, en la audiencia constitucional, el Juez tendrá la posibilidad de retomar el análisis de procedencia del juicio biinstancial y analizar si la violación alegada respecto a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte, realmente resulta de imposible reparación, en cuyo caso se daría el diverso supuesto de procedencia establecido por el legislador en la propia Ley de Amparo vigente, en el artículo 107, fracción III, inciso b).

Consecuentemente, los criterios que se estima deben prevalecer con el carácter de jurisprudencia, son los que se sustentan bajo las tesis que se enuncian a continuación:

LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 134, tercer y cuarto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la licitación pública es el presupuesto necesario para que los particulares presten al Estado servicios de cualquier naturaleza, con lo que se busca asegurar que el ente público contrate bajo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo cual ocurre a través de una convocatoria pública para que se presenten libremente proposiciones solventes. Asimismo, acorde con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 (*), tienen el carácter de "procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio" aquellos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en los que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para respetar el derecho de audiencia; de ahí que, de acuerdo con su naturaleza, los procedimientos de licitación pública constituyan procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos intermedios, por regla general, el quejoso debe esperar al dictado de la resolución final con que culmine dicho procedimiento, ya que, de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia del juicio establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con independencia del carácter positivo o negativo atribuido al acto intermedio. Ahora bien, la regla referida es aplicable salvo que en el juicio quede demostrado que tal acto es de imposible reparación, entendido como el que afecta materialmente en perjuicio del quejoso sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en cuyo caso se actualiza el diverso supuesto de improcedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley citada.

LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. El análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de actos intermedios dictados dentro de un procedimiento de licitación pública seguido en forma de juicio implica un examen detallado y ponderado sobre su naturaleza, el cual no puede verificarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador

no está en aptitud legal de desecharla bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis profundo para determinar su improcedencia el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva, razón por la cual deberá admitirla a trámite, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el estudio exhaustivo de esos supuestos. Considerarlo de otra manera, consistiría en un estudio superficial y a priori de si la violación alegada respecto a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que México es parte, realmente resulta de imposible reparación, en cuyo caso se actualizará el diverso supuesto de procedencia establecido por el legislador en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley citada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada.

SEGUNDO.—Deben prevalecer, con carácter jurisprudencial, los criterios sustentados por este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo las tesis redactadas en la parte final del último considerando de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; envíense las jurisprudencias que se sustentan, al Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; remítanse de inmediato las indicadas jurisprudencias y la parte considerativa de este fallo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Luis Alfonso Hernández Núñez, contra el voto del Magistrado Sergio Javier Coss Ramos en cuanto a la determinación de que, por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos intermedios dentro de un procedimiento de licitación pública, lo que se determinará en la audiencia constitucional y, por mayoría de dos votos, de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Sergio Javier Coss Ramos, contra el voto del Magistrado Luis Alfonso Hernández Núñez, quien se reserva el derecho de formular voto particular, en lo que se refiere a la determinación de admisión de la demanda en el auto inicial, cuando se ale-

gan violaciones directas a la Constitución, quienes firman conjuntamente con la secretaria de Acuerdos María Inocencia González Díaz, que da fe, de conformidad con el artículo 20, fracción V, del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Integración y Funcionamiento de los Plenos de Circuito.

En términos de lo previsto en los artículos 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular del Magistrado Luis Alfonso Hernández Núñez, en la contradicción de tesis 11/2014 del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Disiento del criterio de mis compañeros en la parte donde se afirma que, cuando se reclamen actos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, como lo es el de licitación pública, en todos los casos en que el quejoso alegue en la demanda de amparo violaciones directas a la Constitución, el Juez de Distrito está obligado a admitirla a trámite.

Como se sostiene en la propia ejecutoria dictada por este Pleno, el amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra ese tipo de actos, con independencia del carácter que les atribuya el impetrante de positivos u omisivos, pues para controvertirlos, aun cuando le pudieran irrogar un perjuicio, deberá esperar al dictado de la resolución final en ese procedimiento, de lo contrario se surte la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo.

Como excepción a esa regla, el legislador estableció que el juicio biinstancial procede contra actos u omisiones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de aquellos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Este último supuesto está inmerso en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, el cual, en mi opinión, debe interpretarse en el sentido de que para determinar la procedencia del juicio debe atenderse primordialmente a la naturaleza del acto reclamado, cuyo análisis no necesariamente es propio del dictado de la sentencia, sino que el Juez de Distrito está en oportunidad y aptitud legal de hacerlo desde el auto inicial de trámite a la demanda de amparo.

Así, al analizar de manera integral la demanda y sus anexos, el juzgador puede fijar con claridad cuál es el acto que se reclama y determinar si por su naturaleza jurídica es un acto de imposible reparación, esto es, si afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso y que lo posibilita a acudir al amparo a reclamar

ese acto intermedio antes de que se emita la última resolución en el procedimiento respectivo, ya que de lo contrario tendrá que esperar a su pronunciamiento.

Por tanto, es válido que en esa etapa procesal, por así autorizarlo el legislador en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, una vez realizado ese examen el Juez la deseche de plano por advertir de manera notoria e indudable que el acto intermedio reclamado no ocasiona en la esfera jurídica del promovente un perjuicio irreparable, sino que únicamente le irroga un perjuicio de carácter adjetivo.

Bajo ese contexto, considero que para efectos de determinar la procedencia del juicio biinstancial, tratándose de ese tipo de actos, la base para ponderar sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo, no lo es el que se hubiere alegado en ésta violaciones directas a la Constitución, menos aún el carácter negativo o positivo, ni las calificativas de inconstitucionalidad que les brinde unilateralmente la parte quejosa, sino que debe concretarse al análisis de la naturaleza jurídica del acto reclamado y, a partir de ello, establecer su trascendencia a los derechos sustantivos del particular o a la resolución final que se emita en el procedimiento, examen que, reitero, válidamente puede llevarse a cabo desde el auto de trámite inicial y que no es sólo propio de la sentencia.

En términos de lo previsto en los artículos 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 134, tercer y cuarto párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la licitación pública es el presupuesto necesario para que los particulares presten al Estado servicios de cualquier naturaleza, con lo que se busca asegurar que el ente público contrate bajo las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, lo cual ocurre a través de una convocatoria pública para que se presenten libremente proposiciones solventes. Asimismo, acorde con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 (*), tienen el carácter de "procedimientos

---

Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/2003 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 196, con el rubro: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR."

administrativos seguidos en forma de juicio" aquellos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en los que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para respetar el derecho de audiencia; de ahí que, de acuerdo con su naturaleza, los procedimientos de licitación pública constituyan procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos intermedios, por regla general, el quejoso debe esperar al dictado de la resolución final con que culmine dicho procedimiento, ya que, de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia del juicio establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con independencia del carácter positivo o negativo atribuido al acto intermedio. Ahora bien, la regla referida es aplicable salvo que en el juicio quede demostrado que tal acto es de imposible reparación, entendido como el que afecta materialmente en perjuicio del quejoso sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en cuyo caso se actualiza el diverso supuesto de improcedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley citada.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
PC.IV.A. J/8 A (10a.)

Contradicción de tesis 11/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 28 de octubre de 2014. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Luis Alfonso Hernández Núñez. Disidente: Sergio Javier Coss Ramos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 63/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 154/2012, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 12/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO

CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. El análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de actos intermedios dictados dentro de un procedimiento de licitación pública seguido en forma de juicio implica un examen detallado y ponderado sobre su naturaleza, el cual no puede verificarse en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis profundo para determinar su improcedencia el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva, razón por la cual deberá admitirla a trámite, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el estudio exhaustivo de esos supuestos. Considerarlo de otra manera, consistiría en un estudio superficial y a priori de si la violación alegada respecto a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que México es parte, realmente resulta de imposible reparación, en cuyo caso se actualizará el diverso supuesto de procedencia establecido por el legislador en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley citada.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
PC.IV.A. J/9 A (10a.)

Contradicción de tesis 11/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 28 de octubre de 2014. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Sergio Javier Coss Ramos. Disidente y Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 63/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 154/2012, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 12/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUCILA CASTELÁN RUEDA, ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN, CON EJERCICIO DE VOTO DE CALIDAD DE LA PRIMERA DE LOS NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. DISIDENTES: ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO, MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN Y SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO. PONENTE: LUCILA CASTELÁN RUEDA. SECRETARIA: ROCÍO ITZEL VALDEZ CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—**Competencia.** Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 41-Ter, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito.

SEGUNDO.—**Legitimación.** La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en tanto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales que participan en la presente denuncia de contradicción de criterios.

TERCERO.—Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:

El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil trece resolvió, por mayoría de votos, el juicio de amparo directo administrativo **********, contra el voto del Magistrado José Luis Rodríguez Santillán, en el sentido siguiente:

"15. En el único concepto de violación, la quejosa aduce:

"• Que en el concepto de impugnación identificado como primero, señaló que, en forma indebida se le aplicó el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, debiendo aplicar el artículo 66 de la abrogada ley; que respecto de dicho planteamiento, la Sala responsable consideró que es aplicable la fracción II, inciso b), del precepto transitorio invocado, por estimar que aun cuando el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, durante la vigencia de la abrogada ley, la actora causó baja y dejó de cotizar, en esa fecha sólo tenía cuarenta y ocho años de edad y no los cincuenta y cinco que se requerían para que adquiriera el derecho a obtener la pensión jubilatoria; que fue hasta el año dos mil diez cuando cumplió esa edad, dentro de la vigencia de la nueva Ley del ISSSTE, conforme a la cual se requiere una edad mínima de cincuenta y seis años para adquirir el derecho al otorgamiento de la pensión jubilatoria.

"• Que con dicha determinación la Sala responsable omitió establecer por qué son aplicables las disposiciones previstas en la ley vigente y no la abrogada Ley del ISSSTE; que además, ignoró el argumento que le hizo valer, en el sentido de que en el momento en que causó baja (treinta y uno de diciembre de dos mil tres), era aplicable el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE que establecía una excepción a la regla genérica para obtener la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, que consistía en que, cuando un trabajador hubiere cotizado cuando menos quince años, pero no tuviera los cincuenta y cinco años de edad, podría dejar en el fondo de pensiones las aportaciones correspondientes hasta que cumpliera la edad requerida para el otorgamiento de la pensión.

"• Que en el caso se actualiza dicha hipótesis normativa, ya que se dio de baja el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, cuando aún no tenía los cincuenta y cinco años de edad, por lo que decidió dejar en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social para que en el momento en que cumpliera la edad requerida (diez de septiembre de dos mil diez) se le otorgara la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.

"• Que por tanto, es incorrecto considerar que el derecho para el otorgamiento de la pensión jubilatoria hubiere nacido cuando cumplió los cincuen-

ta y cinco años de edad, conforme a las disposiciones de la ley vigente, sin observar que el requisito relativo a las cotizaciones y antigüedad acontecieron durante la vigencia de la abrogada ley y que decidió dejar en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social con el fin de que al cumplir la edad requerida se le otorgara la pensión jubilatoria en términos del artículo 66 de esa ley.

"• Que sin embargo, la Sala responsable dejó de observar las disposiciones contenidas en los artículos primero, quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley del ISSSTE vigente, en los que se establece el derecho de opción de los trabajadores en activo para elegir el régimen jubilatorio que más les convenga, esto es, el relativo a las cuentas individuales, también llamado bono de pensión o el régimen previsto en el artículo décimo transitorio; que para el uno de abril de dos mil siete, en que entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE, la actora no era trabajadora en activo, por lo que tampoco tuvo derecho a elegir el régimen pensionario y que por lo mismo es incorrecto considerar que hubiere optado por el régimen anterior.

"• Que de los referidos preceptos transitorios de la ley vigente no se infiere qué tratamiento debe darse a los ex trabajadores que se dieron de baja con anterioridad a la fecha en que entró en vigor la ley actual, y que por lo mismo, no existe razón, ni fundamento para aplicar las disposiciones previstas en el artículo décimo transitorio.

"16. Los reseñados argumentos son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado.

"17. En efecto, le asiste razón a la quejosa al señalar que el instituto demandado debió otorgarle la pensión jubilatoria conforme a las disposiciones de la abrogada Ley del ISSSTE y no de la ley vigente, ya que el treinta y uno de diciembre de dos mil tres cumplió con el requisito de haber cotizado por más de quince años, pero como aún no contaba con los cincuenta y cinco años de edad que se requerían para obtener la pensión jubilatoria, decidió acogerse a la prerrogativa establecida en el artículo 66 de la abrogada ley en el sentido de dejar en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social para que una vez que alcanzara la edad requerida se le otorgara la pensión relativa.

"18. En efecto, el artículo 66 de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, establecía:

"'El trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta ley.'

"19. De esta porción normativa se desprende que el trabajador que se separara del servicio después de haber cotizado por más de quince años, podría dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social con el propósito de que al cumplir los cincuenta y cinco años de edad se le otorgara la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios.

"20. En el caso, la actora, ahora quejosa, causó baja y dejó de cotizar a partir del treinta y uno de diciembre de dos mil tres, durante la vigencia de la abrogada Ley del ISSSTE, siendo que hasta esa fecha había cotizado por más de quince años, pero sólo contaba con cuarenta y ocho años de edad y no con los cincuenta y cinco años a que se refiere el artículo 66 de esa ley para que se le otorgara la pensión jubilatoria.

"21. Por ese motivo, la actora encuadraba exactamente en lo dispuesto en la norma transcrita y por ello decidió acogerse a la citada prerrogativa en el sentido de dejar en el fondo de pensiones la totalidad de las aportaciones de seguridad social para que al cumplir con la edad requerida se le otorgara la pensión correspondiente.

"22. En efecto, respecto de los años que la actora cotizó para el instituto demandado, sobre lo cual no se suscitó controversia, la Sala responsable consideró que de la hoja de servicios que obra en el juicio de origen se desprende que dicha parte pagó las aportaciones de seguridad social del periodo comprendido del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y siete, al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, esto es, durante dieciséis años, siete meses y veintiocho días; que con dicha documental demostró que cumplió con uno de los requisitos previstos en el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE, previamente transcrito, para el otorgamiento de la pensión jubilatoria.

"23. Por tanto, el hecho de que el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en que la actora dejó de cotizar para el instituto demandado, sólo contara con cuarenta y ocho años de edad y no con los cincuenta y cinco años que exigía el citado precepto legal, le impidió en esa fecha solicitar el otorgamiento

de la pensión jubilatoria y, por ello, decidió acogerse a la prerrogativa o beneficio establecido en el citado precepto legal que regulaba la pensión relativa, pues dejó en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social para que cuando adquiriera la edad requerida se le otorgara la pensión jubilatoria.

"24. De esto se sigue que bajo la vigencia de la abrogada Ley del ISSSTE la actora adquirió los derechos para que se le otorgara la pensión jubilatoria por edad y años de servicios, pues aunque aún no tenía la edad requerida de cincuenta y cinco años, el precepto legal establecía que debería otorgársele la pensión una vez que cumpliera esa edad, siempre y cuando no hubiere retirado del fondo de pensiones las cotizaciones de seguridad social, como en el caso ocurrió.

"25. Ahora bien, el hecho de que a partir del uno de abril de dos mil siete se hubiere abrogado la anterior Ley del ISSSTE, conforme a la cual, la actora adquirió los derechos para el otorgamiento de la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios, en los términos descritos, y que en sustitución de ese ordenamiento legal hubiere entrado en vigor la actual Ley del ISSSTE, en cuyo artículo décimo transitorio, facción II, inciso b), se establece que quienes en el año dos mil diez y en el dos mil once hubieren cotizado por más de quince años, deberán contar con cincuenta y seis años de edad para tener derecho al otorgamiento de la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios, no conduce a declarar la inaplicabilidad del artículo 66 de la abrogada ley, porque con ello se modificarían o alterarían esos derechos adquiridos o supuestos jurídicos y sus consecuencias que nacieron bajo la vigencia de la ley anterior, en contravención del derecho fundamental de irretroactividad, previsto en el párrafo primero del artículo 14 constitucional.

"26. En el caso, la actora, ahora quejosa, señaló que en el año dos mil diez cumplió los cincuenta y cinco años de edad a que se refería el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE para obtener la pensión jubilatoria, siendo a partir de esa fecha y no del dos mil once, en que el instituto demandado deberá otorgarle la pensión relativa, dada la inaplicabilidad del ordenamiento legal vigente.

"27. Es aplicable al caso por analogía, la tesis X.A.T. 63 L que pronunció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, que puede consultarse en el Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2366, Novena Época, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"'JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. SI SE APLICA UN REGLAMENTO QUE ENTRÓ EN VIGOR POSTERIORMENTE A LA FECHA EN LA CUAL AQUÉLLA SE HABÍA AUTORIZADO, SE AFECTAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DEL DEMANDANTE Y SE VIOLA SU GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El beneficio de la jubilación debe concederse bajo el reglamento de trabajo vigente cuando la solicitud, autorización y vacaciones prejubilatorias que se autorizaron abarcaron periodos anteriores a la fecha en que entró en vigor un nuevo ordenamiento, razón por la cual los trámites efectuados con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador fue jubilado, ya le generaron un derecho adquirido, dado que la jubilación ya estaba autorizada; de ahí que no se está en presencia de una mera expectativa de derecho, porque ya estaba concretada su jubilación desde la data de la autorización, en la cual estaba vigente el reglamento de trabajo anterior al nuevo de uno de agosto de dos mil, esto es, el beneficio ya había sido autorizado en términos del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente del 1o. de agosto de 1993 al 31 de julio de 2000. Por tanto, los aspectos que deben considerarse para determinar la aplicabilidad de un reglamento en lugar de otro, son: a) que la solicitud de jubilación sea presentada durante la vigencia de ese reglamento, b) que la autorización se otorgue con base en el mismo reglamento y, c) que las vacaciones prejubilatorias, en su caso, también se hayan autorizado con base en ese reglamento. En consecuencia, si el reglamento de trabajo que se aplicó al demandante para otorgarle su jubilación entró en vigor con posterioridad a la fecha en la cual se le había autorizado, afecta sus derechos adquiridos y viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional.'

"28. En consecuencia, la sentencia reclamada que determinó que conforme a las disposiciones de la Ley del ISSSTE vigente y no de la abrogada ley, debería establecerse la fecha a partir de la cual surtiría efectos la pensión jubilatoria, se torna violatoria del artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE y, por ende, del derecho fundamental de irretroactividad previsto en el párrafo primero del artículo 14 constitucional.

"29. Por tanto, procede conceder a la quejosa el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que el instituto demandado determine que la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios otorgada a la parte actora, empezará a correr a partir del diez de septiembre

de dos mil diez y no desde el diez de septiembre de dos mil once, así como para que le pague las diferencias que se hubieren generado."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil catorce, por unanimidad de votos, resolvió el juicio de amparo directo administrativo **********, en el que determinó:

"SEXTO.—En principio, como lo solicita la quejosa dentro del cuarto concepto de violación, en la medida que sea procedente, en razón de que se reclama la sentencia dictada en un juicio de nulidad respecto de un acto en materia administrativa, atinente a cuestiones referentes a la pensión que solicita –seguridad social–, el estudio se hará, en su caso, en suplencia de la queja, acorde con la jurisprudencia que se comparte emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, número de tesis XI.5o.(III Región) J/7 (10a.), registro digital: 2003773, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XX, Tomo 2, mayo de 2013, con epígrafe y texto:

"'SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Al establecer el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un

bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja.'

"Aunque previo a analizar los conceptos de violación, es menester destacar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, para así tener un mejor conocimiento del asunto que nos ocupa:

"**********, demandó la nulidad del oficio **********, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, emitido por la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional en la Zona Oriente del Distrito Federal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (fojas 1 a 8)

"El oficio en comento, es del tenor siguiente:

"'… Con fundamento en el artículo 26 del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE, y por instrucciones del C. Delegado Regional Oriente Lic. Humberto Javier Romero Gudiño atiendo su escrito recibido el día 18 de abril del año en curso en el que solicita «… CONCESIÓN DE PENSIÓN DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS, DERIVADO DE LOS 15 AÑOS DE COTIZACIÓN QUE TENGO RECONOCIDOS ANTE ESE INSTITUTO …»

"'Al respecto me permito hacer las siguientes precisiones:

"'Que de un análisis minucioso de la documentación presentada por usted, la cual se acompañó de su escrito de petición, y en virtud de que se encuentra bajo el régimen del artículo décimo transitorio, así como de la información contenida en el sistema institucional denominado Sistema Administrador de Otorgamiento SAO, se observa que usted cotizó al instituto 15 años, 06 meses y 06 días, con fecha de baja 31 de diciembre de 1992 y «55 años de edad»; en lo específico del caso le informo que su trámite podrá llevarse a cabo a partir del día 16 de febrero del año 2017, de conformidad con el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, en vigor debiendo precisarle el contenido, valor y alcance legal de la fracción II, inciso b), del citado ordenamiento, que en lo medular del asunto se reproduce:

"'II. A partir del primero de enero de dos mil diez:

"'Fracción II, inciso b), Los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al Instituto, tendrán derecho a una

pensión de retiro por edad y tiempo de servicios … es de aclarar que tal disposición legal señala: la edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

Años	Edad para pensión por edad y tiempo de servicios
2010 y 2011	56
2012 y 2013	57
2014 y 2015	58
2016 y 2017	59

"'Lo esencial de la tabla de referencia, será hasta el 2018 y en adelante la edad será de 60 años …, (foja 8)

"'Dentro de su único concepto de nulidad, entre otros aspectos, manifestó:

"'…

"'VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, POR LO QUE SOLICITO EL CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA CONVENCIONALIDAD. ...

"'SIENDO QUE SÓLO LA ÚLTIMA PARTE DE LA FRACCIÓN II, INCISO B), DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, ES LA QUE INDICA QUE LA EDAD IRÁ AUMENTANDO GRADUALMENTE DE 56 A 60 AÑOS EN LOS AÑOS 2010 A 2018 Y, POR ELLO, SE COMBATE DE REGRESIVA.

"'Lo anterior es así, pues esta última parte del inciso b) de la fracción II del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, viola el principio de progresividad, en tanto que constituye un retroceso con respecto al grado de protección de mi derecho humano a la seguridad social y salud, pues me obliga a tener una edad mayor para tener acceso a mi pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, así como al servicio médico y demás prestaciones a ésta inherentes, esto es, a haber cumplido con la última tabla que ahí se indica, cuando la fracción I del propio artículo, y el artículo 61 de la Ley del ISSSTE vigente en la fecha en que causé baja, tan sólo me requerían contar con 55 años de edad cumplidos. …'

"Seguido el juicio, la autoridad responsable resolvió que la litis se centra, en determinar si la actora tiene derecho a que se le conceda la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, y que sus conceptos están encaminados a tildar de ilegal la negativa a su concesión de pensión por haberse aplicado de forma indebida las disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, por contravenir sus derechos humanos.

"Al respecto, consideró que lo alegado resulta infundado e hizo un análisis del asunto atendiendo al nuevo orden constitucional, para lo cual se fundamentó en los siguientes criterios jurisprudenciales: 'SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.'; 'CONTROL DE CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.' 'PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.'

"A partir de ahí, hizo un análisis para determinar si la autoridad demandada al negar la pensión que le fue solicitada se dio o no una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la demandante, lo que consideró, constituye implícitamente una parte de su argumento, al señalar que conforme a lo dispuesto por el diverso 61 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a la fecha en que se dio de baja del servicio público (ley abrogada), tan sólo se requería contar con cincuenta y cinco años de edad cumplidos para acceder a una pensión por jubilación en esa modalidad (pensión de retiro por edad y tiempo de servicios), lo que no ocurre con lo preceptuado por el artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"Al efecto, precisó los antecedentes de la resolución impugnada, como son los años de servicio de la actora, así como la edad que ésta tiene, y para ello destacó el contenido del artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de mayo de dos mil siete, del que se desprende que para adquirir el derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, se requiere un periodo mínimo de cotización de quince años o más al instituto y una edad mínima de cincuenta y cinco años, la que a partir del uno de enero de dos mil diez se incrementará cada dos años hasta el año dos mil dieciocho, para llegar a una edad mínima de sesenta años.

"Y, por otro lado, resaltó lo establecido en la ley derogada en los artículos 61 a 66 que regulaba la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, a la

que tendrían derecho los trabajadores que reunieran tres requisitos: a) que el trabajador se separara voluntariamente del servicio o quedara privado de un trabajo remunerado; b) que tuviera cincuenta y cinco años de edad (sin incremento gradual en edad); y c) que tuviera quince años de servicio como mínimo e igual tiempo de cotización.

"Después explicó lo relativo a la irretroactividad de la ley, a partir de las teorías de derechos adquiridos y establecer las diferencias con simples expectativas de derecho, y para ello invocó la jurisprudencia de rubro: 'IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.'; para concluir en el sentido de que la actora al momento en que se dio de baja voluntaria de la función pública, no contaba con cincuenta y cinco años de edad cumplidos (en 1992), y al momento en que se modificó la legislación y surge la que actualmente se encuentra vigente, tampoco contaba con la edad mínima requerida, por lo que su caso es un claro ejemplo de la actualización de la teoría de las expectativas de derechos, puesto que al momento en que comienza su vigencia la nueva ley, que es el uno de abril de dos mil siete, la demandante aún no había cumplido los requisitos que preveía la ley que pretende se le aplique y, por ende, le resulta totalmente aplicable la ley que rige actualmente, y debe atender al contenido del artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente.

"También invocó las jurisprudencias de rubro: 'ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).' e 'ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).', y concluyó:

"'Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el aumento gradual reflejado para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de cincuenta y seis a sesenta años, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que tal circunstancia no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo, además de

que el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo fija las garantías mínimas de seguridad social a favor de los trabajadores al servicio del Estado, y deja a la ley secundaria su regulación, es decir, impone al legislador reglamentar por medio de una ley los procedimientos, requisitos y modalidades necesarias para hacer efectivos esos derechos sociales, sin que le establezca forma o lineamiento alguno para ejercer dicha facultad, pues resulta evidente que dicho ordenamiento (incluido el artículo transitorio controvertido) no priva al trabajador de gozar en un momento dado del derecho a la pensión por jubilación, como derecho humano a la seguridad social …'

"Para finalmente considerar que no hubo transgresión al derecho a la seguridad social, materializado en la concesión de una pensión, como derecho humano fundamental, o en su caso, a los derechos económicos, sociales y culturales, establecidos en el artículo 26,[1] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), a la cual se incorporó el Estado Mexicano a través de la firma del citado instrumento de adhesión el día 3 de febrero de 1981, en atención a que el artículo transitorio controvertido no conculca el derecho humano a la seguridad social, sino que por el contrario, en él se encuentra reglamentada dicha garantía a favor de los trabajadores del Estado, sin que el incremento gradual en la edad mínima para acceder a una pensión bajo la modalidad de retiro en edad y tiempo de servicios, vulnere el derecho a la pensión como tal, que es precisamente lo que persigue el principio de progresividad al prohibir a los Estados parte de dicha convención, suprimir el derecho que tiene toda persona a la seguridad social, mediante la cobertura por jubilación, lo que no acontece en el caso a estudio. E invocó la jurisprudencia: 'ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).'

"Establecido lo anterior, también cabe destacar que el estudio de los conceptos de violación se hará, algunos en forma conjunta, e incluso en orden distinto al propuesto por la parte quejosa, lo cual no irroga agravio alguno a esta última, ya que el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente prevé, entre otras cuestiones, que el órgano jurisdiccional podrá examinar en su conjunto

[1] "Artículo 26. Desarrollo progresivo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados."

los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; sin embargo, no impone la obligación al juzgador de amparo de seguir el orden propuesto por el quejoso, pues la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, y es en esta forma que este órgano de control constitucional realizará el pronunciamiento correspondiente a los puntos de inconformidad expresados por la parte quejosa.

"Apoya este razonamiento la jurisprudencia en materia común VI.2o.C. J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, con el rubro y texto que dicen:

"'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.—El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.'

"En los conceptos de violación primero y segundo, fundamentalmente, alega lo siguiente:

"Que no se cumple con los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez que la autoridad responsable reconoce la validez de la resolución impugnada bajo el argumento de que el artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la Ley del ISSSTE en vigor, no viola su derecho humano a la irretroactividad de la ley, cuando nunca fue ésta la litis que hizo valer en el único concepto de impugnación, sino que señaló que tal norma violaba el principio de progresividad contenido en el artículo 1o. constitucional. E invoca las jurisprudencias de rubro: 'CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.' y 'SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.'

"Que tampoco se cumple con los citados principios de congruencia y exhaustividad, al no resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada, violando con ello también su obligación de analizar la litis con base en el principio de progresividad, al haber solicitado que se ejerciera el control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad del artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), *in fine*, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se determinara que viola el principio de progresividad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Ante ello, solicita que este órgano colegiado realice el control estricto de la constitucionalidad y convencionalidad de dicha norma, y se determine que viola el principio de progresividad, conforme al cual, el Estado tiene la ineludible obligación de prever las medidas necesarias para garantizar que todas aquellas personas que han concluido con su periodo de servicios en activo, que además han cotizado ante alguna institución durante su vida laboral, puedan obtener el pleno goce del derecho a la pensión, para tener una vida digna y decorosa durante su etapa de senectud; y no debe imponer condiciones que dificulten o restrinjan el acceso a un derecho universal, fundamental de los adultos mayores como lo es la pensión.

"Se refiere a los artículos 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en los cuales se contempla el principio de progresividad, y además refiere que el numeral décimo transitorio, fracción II, inciso b), última parte, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece medidas regresivas, porque desobedece lo dispuesto en los preceptos 4, 5 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) el cual, fue aceptado y ratificado por el Estado Mexicano. E invoca las jurisprudencias de rubro: 'PROGRESIVIDAD. CÓMO DEBE INTERPRETARSE DICHO PRINCIPIO POR LAS AUTORIDADES A PARTIR DE LA REFORMA QUE SUFRIÓ EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.'; 'PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CONSISTEN.' y 'PRINCIPIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD). ORIENTAN LA INTERPRETACIÓN DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN ESA MATERIA Y SON DE INELUDIBLE OBSERVANCIA PARA TODAS LAS AUTORIDADES.'

"Y conforme a todo lo anterior, pide que se declare la inconstitucionalidad del artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), última parte, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 1 de abril de 2007,[2] al violar el principio de progresividad contenido en el artículo 1o. constitucional.

"Los conceptos de violación sintetizados son ineficaces.

"En principio, debe destacarse que aun cuando pudiera estimarse que es cierto que el análisis toral que hizo la autoridad responsable, fue bajo la perspectiva del principio de irretroactividad de la ley, y no menos cierto es,

---

[2] "Décimo. A los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:
"I. A partir de la entrada en vigor de esta ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve:
"…
"II. A partir del primero de enero de dos mil diez:
"…
"b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al instituto, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.
"El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:

"15 años de servicio	50 %
"16 años de servicio	52.5 %
"17 años de servicio	55 %
"18 años de servicio	57.5 %
"19 años de servicio	60 %
"20 años de servicio	62.5 %
"21 años de servicio	65 %
"22 años de servicio	67.5 %
"23 años de servicio	70 %
"24 años de servicio	72.5 %
"25 años de servicio	75 %
"26 años de servicio	80 %
"27 años de servicio	85 %
"28 años de servicio	90 %
"29 años de servicio	95 %

"La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

"Años	Edad para pensión por edad y tiempo de servicios
"2010 y 2011	56
"2012 y 2013	57
"2014 y 2015	58
"2016 y 2017	59
"2018 en adelante	60 …"

que el planteamiento formulado fue relacionado al principio de progresividad; sin embargo, debe tomarse en cuenta, que después del análisis que realizó la responsable (irretroactividad) concluyó con lo siguiente:

"'De lo anterior, se puede señalar que el argumento sostenido con antelación no implica que se haya transgredido o vulnerado el derecho a la seguridad social, materializado en la concesión de una pensión, como derecho humano fundamental, o en su caso, a los derechos económicos, sociales y culturales, establecidos en el artículo 26,[3] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), a la cual se incorporó el Estado Mexicano a través de la firma del citado Instrumento de adhesión el día 3 de febrero de 1981, en atención a que el artículo transitorio controvertido no conculca el derecho humano a la seguridad social, sino que por el contrario, en él se encuentra reglamentada dicha garantía a favor de los trabajadores del Estado, sin que el incremento gradual en la edad mínima para acceder a una pensión bajo la modalidad de retiro en edad y tiempo de servicios, vulnere el derecho a la pensión como tal, que es precisamente lo que persigue el principio de progresividad al prohibir a los Estados parte de dicha convención, suprimir el derecho que tiene toda persona a la seguridad social, mediante la cobertura por jubilación, lo que no acontece en el caso a estudio.

"Consecuentemente, no existe razón fundada para estimar que con la resolución impugnada, se viole lo dispuesto en los artículos constitucionales y convencionales que estima transgredidos.

"Al respecto, sirve de apoyo la (cita fuente y datos de identificación), la cual dispone lo siguiente:

"'ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).' …

"De lo anterior se desprende que, la responsable, aunque no de un modo exhaustivo, como lo pretendía la actora al exponer sus conceptos de nulidad,

---

[3] "'Artículo 26. Desarrollo progresivo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados."

sí hizo un pronunciamiento en relación al principio de progresividad, para concluir que no se daba violación alguna.

"Al margen de lo anterior, precisa destacar que la ineficacia apuntada al inicio del estudio de los conceptos de violación, deriva del hecho de que en relación a la violación o no del principio de progresividad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hizo un pronunciamiento al respecto, al resolver, entre otros asuntos, el amparo en revisión 229/2008 (concerniente a la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

"En efecto, en relación al tema que nos ocupa, consideró que el aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, así como el incremento de las cuotas respectivas, se encuentra plenamente justificado, por lo que no puede estimarse que las modificaciones al anterior sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador, sean contrarias al principio de progresividad de los derechos sociales que prevé el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de 'San Salvador', adicional a dicha Convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habida cuenta que dichas modificaciones no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que regula la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de mil novecientos ochenta y tres.

"Lo anterior, se encuentra reflejado en las siguientes consideraciones:

"'...

"'I. Aumento de la edad mínima para tener derecho a una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, así como de la cuota respectiva.

"'Como cuestión previa, es importante precisar, que el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución General de la República establece las bases mínimas de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, como son entre otras, la jubilación, invalidez, vejez y muerte, sin establecer los términos o condiciones conforme a las cuales, deberán otorgarse dichas prestaciones, de lo que se sigue que la facultad conferida al legislador

para regular tales aspectos no encuentra en el citado precepto constitucional limitación o condición alguna.

"'Sin embargo, la evolución normativa del referido régimen de seguridad social, permite advertir, que para tal efecto, el legislador ordinario considera diversos aspectos técnicos que le permiten conocer los costos del servicio y la eficaz realización del régimen en un determinado momento histórico, tales como los cálculos actuariales, los censos de población y las expectativas de vida, entre otros.

"'En ese orden, se estima necesario tener presente que, de la exposición de motivos de la ley reclamada se advierte que la razón fundamental que motivó la reforma al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es la crisis financiera por la que éste atraviesa y que reduce su capacidad para hacer frente a sus obligaciones, pues aun cuando los fondos médicos y de pensiones absorben recursos de otros fondos, depende en gran medida del presupuesto federal.

"'Se precisa que el problema financiero más grave que enfrenta el instituto es el del pago de las pensiones, ya que su fondo presenta un déficit actuarial importante[4] lo que se explica porque con el paso de los años la esperanza de vida se ha incrementado y la edad promedio de retiro ha disminuido, lo que genera un incremento en la duración de las pensiones, habida cuenta que el número de cotizantes por pensionado se ha reducido considerablemente.

"'Para demostrar lo anterior, se señala que entre el periodo comprendido de mil novecientos setenta y cinco al dos mil cinco la esperanza de vida aumentó de sesenta y cinco a setenta y siete años de edad mientras que la edad de retiro disminuyó de sesenta y dos a cincuenta y seis años y el número de cotizantes por pensionado se redujo de veinte a cuatro, lo cual implica que mientras en el año de mil novecientos setenta y cinco las pensiones tenían una duración de tres años y cada una se cubría con las aportaciones de veinte trabajadores, para el año dos mil cinco las pensiones se pagan por un periodo de veintiún años y cada una se cubre con las de cuatro trabajadores.

[4] El monto del subsidio al sistema de pensiones equivale aproximadamente a dos y media veces el monto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Se precisa que cada año que se posponga la reforma el déficit actuarial se incrementará aproximadamente 100 mil millones de pesos.

"'Asimismo, se destaca que el instituto presenta un déficit de flujo de caja que año con año tiene que ser subsidiado por el Gobierno Federal.[5] Dicho déficit deriva del hecho de que al incrementarse la duración de las pensiones aumenta el tiempo durante el cual los pensionados requieren servicios de salud, habida cuenta que éstos no contribuyen al financiamiento de dichos servicios; asimismo, el perfil epidemiológico de la población cambió de enfermedades infecciosas a enfermedades crónico degenerativas que son más costosas y prolongadas y los costos de los medicamentos aumentaron por encima de la inflación.

"'Por tal motivo, se precisa que financieramente no es viable mantener el actual sistema de pensiones, habida cuenta que ello obligaría a un aumento permanente del subsidio por parte del Gobierno Federal, lo que es injusto para la sociedad que tiene que financiarlo con sus contribuciones y para el país en tanto se tienen que distraer recursos destinados a otros rubros igualmente importantes para poder afrontar las obligaciones del instituto. De no corregirse el problema, el déficit actuarial del sistema de pensiones no sólo pondrá en peligro el pago de las pensiones sino además el ahorro nacional, la estabilidad financiera y el desarrollo macroeconómico del país.

"'Lo expuesto con antelación evidencia, que el aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, así como el incremento de las cuotas respectivas se encuentra plenamente justificado, máxime que tal como quedó establecido, el Estado como tal no tiene la obligación de cubrir, con cargo al presupuesto federal, el pago de las pensiones, de ahí que contrario a lo que pretende demostrar la quejosa, el referido incremento no transgrede la garantía de seguridad social.

"'En tal sentido, no puede estimarse que las modificaciones al anterior sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador, sean contrarias al principio de progresividad de los derechos sociales que prevé el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de «San Salvador», adicional a dicha convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habida cuenta que en apartados precedentes quedó demostrado que dichas modificaciones no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez,

[5] Para el dos mil siete se calculó un déficit de 42 mil millones de pesos y para el dos mil doce se calcula que podría alcanzar los 77 mil millones de pesos.

muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que regula la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de mil novecientos ochenta y tres. …'

"Asimismo, el tema que nos ocupa, esto es lo relativo al aumento gradual de la edad mínima para tener derecho a la pensión, también fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la perspectiva de la irretroactividad, ello con el fin de determinar frente a qué tipo de derechos se encontraban los trabajadores, y que dicho estudio guarda relación con el tema de la progresividad; al respecto consideró:

"'…

"'Por otra parte, debe tenerse en cuenta que conforme a la teoría de los derechos adquiridos, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos, por lo que, mientras éstos no se cumplan, la pensión constituye una expectativa de derecho, de lo que se sigue que el incremento de la edad mínima para tener derecho a una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, no afecta derechos adquiridos.

"'Incluso, destaca que el artículo 48 de la ley derogada expresamente señala que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza, nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.

"'Asimismo, de acuerdo a la teoría de los componentes de la norma la pensión es la consecuencia de una serie de supuestos parciales, por tanto, si tales supuestos se realizan con posterioridad a que entró en vigor la ley reclamada, es inconcuso que el otorgamiento de la pensión deberá realizarse en los términos previstos por ésta.

"'En ese orden, es evidente que el hecho de que por virtud del aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, los trabajadores deban laborar más años, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, habida cuenta que dicha modificación no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley reclamada, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.'

"...

"De lo anterior se desprende que el hecho de que por virtud del aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, los trabajadores deban laborar más años, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, habida cuenta que dicha modificación no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley reclamada, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.

"De tales consideraciones, emanaron las siguientes jurisprudencias:

"'Novena Época
"'Registro: 166382
"'Instancia: Pleno
"'Tesis: jurisprudencia
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'Tomo XXX, septiembre de 2009
"'Materias: constitucional y laboral
"'Tesis: P./J. 125/2008
"'Página: 35

"'ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).—Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, incluso, el artículo 48 de la ley derogada expresamente establecía que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En esa virtud, si el artículo décimo transitorio, para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1o. de enero de 2010, además de 30 años de cotización para los hombres y 28 años para las mujeres, establece como requisito 51 años de edad para los hombres y 49 para las mujeres, la que se incrementará de manera gradual hasta llegar a los 60 y 58 años respectivamente, en el año 2026, aumento que también se refleja para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de 56 a 60 años y para la de cesantía en edad avanzada de 61 a 65 años, igualmente de manera gradual, lo que implica que en relación con

el sistema pensionario anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.'[6]

"'Novena Época
"'Registro: 166381
"'Instancia: Pleno
"'Tesis: jurisprudencia
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'Tomo XXX, septiembre de 2009
"'Materias: constitucional y laboral
"'Tesis: P./J. 124/2008
"'Página: 37

"'ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO

[6] "Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 125/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho."

VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).—No puede estimarse que las modificaciones al anterior sistema de pensiones y el incremento de las cuotas a cargo del trabajador, sean contrarias al principio de progresividad de los derechos sociales que prevé el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1 del Protocolo de 'San Salvador', adiciona a dicha convención, así como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habida cuenta que dichas modificaciones no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada e indemnización global que regulaba la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983.'[7]

"En ese tenor, al margen de que la autoridad responsable no haya hecho un pronunciamiento exhaustivo en relación al principio de progresividad, que la actora estima vulnerado, debe estimarse que con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se da contestación a sus conceptos de violación; de ahí, que no sea dable declarar la inconstitucionalidad del artículo décimo transitorio por existir un pronunciamiento en ese sentido.

---

[7] "Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 124/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho."

"Dada la relación que guarda lo alegado en el cuarto concepto de violación, con lo hasta aquí analizado, se procede a analizar lo allí señalado.

"En éste señala que, la sentencia combatida atenta contra sus derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación contenidos en el artículo 1o. constitucional, y en el caso, se está validando que una norma secundaria le imponga una restricción al impedirle acceder a su pensión mientras no cumpla una edad mayor a los 55 años.

"Refiere que no existe causa justificable para que se otorgue la pensión a aquellas personas que antes del dos mil diez ya habían cumplido 55 años de edad, y que por el solo hecho de que los cumplió hasta el quince de febrero de dos mil trece se le niegue.

"En ese tenor, refiere que la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o. constitucional, respecto de los derechos contenidos en ésta, se entiende a que todas las autoridades de nuestro país tienen la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas.

"Invoca una tesis aislada, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.'

"Para estar en posibilidad de examinar el anterior planteamiento, resulta importante destacar que, en debido respeto a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en el artículo 1o. de la Constitución, debe considerarse que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

"Así, los poderes públicos han de tener en cuenta, que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor, pero los que se encuentren en situación diferente deben ser tratados de manera distinta.

"De esta manera, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto, que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, en tanto que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que implica la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado.

"El valor superior que persigue el principio de igualdad consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

"Esto es, no toda desigualdad de trato es violatoria de garantías, sino sólo cuando produce distinción entre situaciones objetivas y de hecho iguales, sin que exista para ello una justificación razonable e igualmente objetiva; por ello, a iguales supuestos de hecho corresponden similares situaciones jurídicas, pues en este sentido el legislador no tiene prohibición para establecer en la ley una desigualdad de trato, salvo que ésta resulte artificiosa o injustificada.

"Así, del principio de igualdad derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: 1) por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual; y 2) por otro lado, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga.

"Le resulta cita, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, materia constitucional, tesis 1a./J. 81/2004, página 99, de contenido siguiente:

"'IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO.—La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales

ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas; es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la norma se encuentren siempre, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio (o privarse de un beneficio) desigual e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones disparas, lo que se traduce en desigualdad jurídica.'

"En relación con la garantía de no discriminación, el Tribunal Pleno estableció en su jurisprudencia P./J. 114/2008, que la misma proscribe cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, de manera tal que no es discriminatoria cualquier distinción de trato entre las personas, sino sólo aquellas que atenten contra la dignidad humana y las que tengan por efecto anular o menoscabar sus derechos y libertades, o bien, la igualdad real de oportunidades. Señala la mencionada jurisprudencia:

"'ISSSTE. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).—La garantía de no discriminación que consagra el tercer párrafo

del artículo 1o. constitucional, proscribe cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; sin embargo, no es cualquier distinción de trato entre las personas, sino sólo aquellas que atenten contra la dignidad humana, así como las que tengan por efecto anular o menoscabar sus derechos y libertades, o bien, la igualdad real de oportunidades. A partir de ello, el artículo quinto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, al disponer que los trabajadores tienen derecho a optar entre el régimen que se establece en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE en sus cuentas individuales, no viola las citadas garantías, pues aun cuando pudiera estimarse que los regímenes de pensiones de retiro a que se refiere suponen el goce de derechos de diferente sentido y alcance, lo cierto es que ello no implica que el derecho de opción que prevé dicho numeral genere un trato disímil y discriminatorio entre los trabajadores del Estado, en tanto se otorga a todos aquellos que se encuentren en activo al entrar en vigor la ley reclamada, sin hacer distinción alguna por razones de género, edad, profesión u otra análoga; habida cuenta que su ejercicio no se sujeta a ninguna condición, lo que evidencia que tampoco tiene como fin anular o menoscabar la igualdad real de oportunidades de los trabajadores ni sus derechos, pues no debe soslayarse que en términos de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio, a todos se les reconocen las aportaciones que realizaron con anterioridad a fin de garantizar sus beneficios pensionarios.'[8]

"Como un paréntesis, precisa señalar que las anteriores consideraciones forman parte de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3788/2012, y del cual surgió la tesis aislada 2a. LXI/2013 (10a.), de rubro: 'JUBILACIÓN. EL TOPE DE 10 SALARIOS MÍNIMOS A QUE PUEDE ASCENDER, NO VIOLA LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEYES DEL ISSSTE DE 1983 Y DE 2007).'

"Ahora bien, antes de continuar con el análisis de los principios que se estiman violados, resulta necesario señalar lo que dispone el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, en su porción normativa, que se tilda de inconstitucional.

---

[8] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Pleno, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 25, registro digital: 168645.

"'Décimo. A los trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

"'I. A partir de la entrada en vigor de esta ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve:

"'...

"'II. A partir del primero de enero de dos mil diez:

"'...

"'b) Los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al instituto, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.

"'El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:

"'15 años de servicio	50 %
"'16 años de servicio	52.5 %
"'17 años de servicio	55 %
"'18 años de servicio	57.5 %
"'19 años de servicio	60 %
"'20 años de servicio	62.5 %
"'21 años de servicio	65 %
"'22 años de servicio	67.5 %
"'23 años de servicio	70 %
"'24 años de servicio	72.5 %
"'25 años de servicio	75 %
"'26 años de servicio	80 %
"'27 años de servicio	85 %

"'28 años de servicio	90 %
"'29 años de servicio	95 %

"'La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

"'Años	Edad para pensión por edad y tiempo de servicios
"2010 y 2011	56
"2012 y 2013	57
"2014 y 2015	58
"2016 y 2017	59
"2018 en adelante	60 …'

"Ahora bien, las razones fundamentales por las cuales la quejosa estima que dicha regulación resulta violatoria de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, son las siguientes:

"1. Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo ésta puede imponer restricciones a los derechos fundamentales, y en el caso, se permite que una norma secundaria le imponga una restricción al impedirle totalmente acceder a su pensión.

"2. Que no existe justificación para que se otorgue la pensión a aquellas personas que antes del dos mil diez ya habían cumplido cincuenta y cinco años.

"Lo así alegado, no puede considerarse como violación a sus derechos humanos, ya que existen razones objetivas y razonables que justifican constitucionalmente el establecimiento del aumento gradual de la edad mínima, lo que quedó evidenciado al analizarse lo relativo a la progresividad.

"En efecto, como quedó apuntado en párrafos que anteceden, de la exposición de motivos se advierte que la razón fundamental que motivó la reforma al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es la crisis financiera por la que éste atraviesa y que reduce su

capacidad para hacer frente a sus obligaciones, pues aun cuando los fondos médicos y de pensiones absorben recursos de otros fondos, depende en gran medida del presupuesto federal.

"Además, que el problema financiero más grave que enfrenta el instituto es el del pago de las pensiones, ya que su fondo presenta un déficit actuarial importante lo que se explica porque con el paso de los años la esperanza de vida se ha incrementado y la edad promedio de retiro ha disminuido, lo que genera un incremento en la duración de las pensiones, habida cuenta que el número de cotizantes por pensionado se ha reducido considerablemente.

"Y tal consideración se justificó del siguiente modo:

"'Para demostrar lo anterior, se señala que entre el periodo comprendido de mil novecientos setenta y cinco al dos mil cinco la esperanza de vida aumentó de sesenta y cinco a setenta y siete años de edad mientras que la edad de retiro disminuyó de sesenta y dos a cincuenta y seis años y el número de cotizantes por pensionado se redujo de veinte a cuatro, lo cual implica que mientras en el año de mil novecientos setenta y cinco las pensiones tenían una duración de tres años y cada una se cubría con las aportaciones de veinte trabajadores, para el año dos mil cinco las pensiones se pagan por un periodo de veintiún años y cada una se cubre con las de cuatro trabajadores.

"'Asimismo, se destaca que el instituto presenta un déficit de flujo de caja que año con año tiene que ser subsidiado por el Gobierno Federal. Dicho déficit deriva del hecho de que al incrementarse la duración de las pensiones aumenta el tiempo durante el cual los pensionados requieren servicios de salud, habida cuenta que éstos no contribuyen al financiamiento de dichos servicios; asimismo, el perfil epidemiológico de la población cambió de enfermedades infecciosas a enfermedades crónico degenerativas que son más costosas y prolongadas y los costos de los medicamentos aumentaron por encima de la inflación.

"'Por tal motivo, se precisa que financieramente no es viable mantener el actual sistema de pensiones, habida cuenta que ello obligaría a un aumento permanente del subsidio por parte del Gobierno Federal, lo que es injusto para la sociedad que tiene que financiarlo con sus contribuciones y para el país en tanto se tienen que distraer recursos destinados a otros rubros igualmente importantes para poder afrontar las obligaciones del instituto. De no corregirse el problema, el déficit actuarial del sistema de pensiones no sólo pondrá en peligro el pago de las pensiones sino además el ahorro nacional, la estabilidad financiera y el desarrollo macroeconómico del país. …'

"De lo anterior, queda evidenciado que, el aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, se encuentra plenamente justificado, máxime que tal proceder no implica que se afecte un derecho adquirido por los trabajadores al amparo de la ley anterior, pues en tanto no se actualicen los supuestos que condicionan el otorgamiento de una prestación, ésta constituye una expectativa de derecho.

"Además, no puede hacerse un análisis en los términos planteados por la quejosa, esto es, bajo la premisa de que las personas que cumplieron cincuenta y cinco años antes del dos mil diez hayan tenido derecho a su pensión y las que cumplieron con posterioridad tendrán que esperarse, porque conforme a lo ya expuesto el derecho de igualdad previsto en el artículo primero constitucional no implica que todos los individuos siempre deban encontrarse en condiciones de absoluta igualdad, sino que se refiere a la igualdad jurídica, consistente en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato de aquellos en similar situación de hecho; por tanto, no toda desigualdad de trato es violatoria de derechos humanos, sino sólo cuando se produce distinción entre situaciones objetivas y de hechos iguales, sin existir para ello una justificación razonable e igualmente objetiva, de manera que a iguales supuestos de hecho corresponden similares situaciones jurídicas.

"Por ello, se concluye que en el caso no se está en presencia de trato desigual a iguales, ya que se está ante situaciones diversas; máxime, que como ya se dijo, en el caso hasta que no se actualicen los supuestos que condicionan el otorgamiento de una prestación, ésta constituye una expectativa de derecho, por lo que no se puede colocar en situaciones de diversas personas que en distinto año se ubicaron en el supuesto.

"Por otra parte, para continuar con el análisis de este concepto de violación y específicamente, en relación al argumento que realiza en función de que se le restringe acceder a su pensión, vinculándolo con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que sólo la Constitución puede imponer restricciones a los derechos fundamentales; dicha manifestación, se analizará de forma conjunta con lo expuesto en el tercer concepto de violación, en el que alega, que con motivo de la falta de congruencia y exhaustividad, en la que dice, incurrió la autoridad responsable, alude violación al derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional, ya que en los términos en que se resuelve, permite que el instituto enjuiciado siga sin proporcionarle el servicio médico del cual tanto depende por las enfermedades múltiples que padece, so pena de poner en peligro su vida; y señala que demostró su extrema urgencia con las pruebas que anexó a su demanda, y que no fueron analizadas por la responsable.

"E invoca las jurisprudencias, sustentadas por diversos órganos colegiados, de rubro: 'PRUEBAS, FALTA DE VALORACIÓN DE LAS. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS.'; 'PRUEBAS. VALORACIÓN DE LAS.' y 'PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONSTITUYE UNA FORMALIDAD QUE ATAÑE A LA DECISIÓN JUDICIAL Y NO DEL PROCEDIMIENTO.'

"Con base en lo anterior, solicita que se determine la inconstitucionalidad del artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), última parte, de la Ley del ISSSTE vigente, al violar el derecho humano a la salud contenido en el artículo 4o. constitucional, porque impide que se goce de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios al tener 55 años cumplidos, sino que exige un requisito mayor de edad, y que para su caso sería hasta el año 2017, es decir, que se le obliga a esperar cuatro años más de lo que se establecía en la anterior Ley del ISSSTE y de la propia fracción I del artículo décimo transitorio referido.

"Lo anterior es infundado.

"Para llegar a dicha determinación, precisa destacar lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró al resolver, entre otros asuntos, el amparo en revisión 229/2008, en relación a la 'limitación a los servicios de salud'; a saber:

"'...

"'DÉCIMO SEXTO.—Limitación de los servicios de salud. Argumenta la parte quejosa que por lo que se refiere a los seguros de salud y riesgos de trabajo, la ley reclamada es inconstitucional en tanto condiciona la prestación de los servicios de salud consistentes: en atención médica preventiva, curativa y de maternidad, así como la rehabilitación física y mental a las reservas financieras y actuariales del seguro de salud, y los demás que considere pertinentes, con base en un sistema de evaluación y seguimiento que calificará y propondrá asignaciones presupuestarias por resultados, y procurará su equilibrio financiero, a pesar de que se trata de prestaciones que son fundamentales para la salud de los trabajadores y sus familias, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos a) y d) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, motivo por el cual, deben proporcionarse obligatoriamente por el Estado.

"'Son infundados los argumentos anteriores, por las razones que a continuación se exponen:

"'I. Derecho a la protección de la salud.

"'El artículo 4o., tercer párrafo, de la Constitución General de la República, expresamente señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrente de la Federación y las entidades federativas en materia de salud general, conforme a lo que dispone la fracción XIV del artículo 73 de esta Constitución.

"'El derecho a la protección de la salud, se elevó a rango constitucional, por virtud del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, con la finalidad de que los servicios de salud alcancen a la población abierta, que no es amparada por los sistemas de seguridad social, a través de los programas asistenciales que lleve a cabo el Gobierno de la Nación, según deriva de la exposición de motivos relativa, en la que además se precisó, que se optó por la expresión 'derecho a la protección de la salud', porque tiene el mérito de connotar que la salud es una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, y que una ley reglamentaria definirá las bases y las modalidades de ese acceso para que tengan en cuenta las características de los distintos regímenes de seguridad social, que se fundan en los criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso; de los sistemas de solidaridad social, que usan recursos fiscales, la cooperación comunitaria y la colaboración institucional, y de los sistemas de asistencia, que descansan en el esfuerzo fiscal del Estado.

"'Ahora bien, del análisis armónico de lo dispuesto en los artículos 1o., 5o., 6o., fracción I, 23, 24, 27, 32 a 39, 77 Bis 1, 77 Bis 3, 77 Bis 7, 77 Bis 11, 77 Bis 15, 77 Bis 21 y 77 Bis 26 de la Ley General de Salud, se desprende lo siguiente:

"'• La ley reglamentaria del artículo 4o., tercer párrafo, de la Constitución General de la República, es la Ley General de Salud, que establece las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud.

"'• El Sistema Nacional de Salud se integra por las dependencias del Gobierno Federal y local, las personas físicas y morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto, dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud, mediante la prestación de servicios de salud a toda la población, entre otras medidas.

"'• Los servicios de salud, en términos generales, son todas aquellas acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas y de la sociedad en general, y se consideran como servicios básicos la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo urgencias, así como la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

"'• Los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en:

"'**a)** Servicios públicos a la población general. Son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar tales servicios, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas.

"'**b)** Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social. Son los prestados por éstas a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios.

"'Dichos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad social y por las contenidas en la Ley General de Salud, en lo que no se oponga a aquéllas.

"'Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios de salud que prestan los establecimientos públicos de salud, en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones.

"'**c)** Servicios sociales y privados. Son de carácter social los que se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos.

"'Son privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mer-

cantiles, lo cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos.

"'**d)** Otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios, mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema.

"'Lo hasta aquí expuesto, permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce, en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, los cuales serán determinados por la ley relativa considerando las características de: a) los regímenes de seguridad social, que se fundan en los criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso; b) los sistemas de solidaridad social, que usan recursos fiscales, la cooperación comunitaria y la colaboración institucional; y c) los sistemas de asistencia, que descansan en el esfuerzo fiscal del Estado.

"'Asimismo, se desprende que en virtud de que la salud es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los servicios de salud, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro, a aquéllos que carezcan de recursos para cubrirlas.

"'Ahora bien, uno de los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a los servicios de salud, son los regímenes de seguridad social que contempla el artículo 123 constitucional, los cuales se regulan por las disposiciones legales que determinan su organización y funcionamiento.

"'En relación con lo anterior, cabe destacar que del análisis armónico de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX y apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente permanente dejó en manos del legislador ordinario regular lo concerniente a la seguridad social, limitando su actuación

únicamente a no contravenir las bases mínimas que previó para tal efecto, entre las que destacan, la creación de seguros de invalidez, de enfermedades y accidentes profesionales y no profesionales, tanto para los trabajadores que prestan sus servicios a un particular, como para los que prestan sus servicios al Estado, mismas que no sujetó a la satisfacción de requisito alguno.

"'En esa tesitura, es evidente que las instituciones de seguridad social, constituyen un mecanismo a través del cual, se puede hacer efectivo el derecho a la protección de la salud; sin embargo, ello no implica que dichas instituciones estén obligadas a prestar los servicios de salud a cualquier persona que lo solicite, pues para ello es menester que se satisfagan los requisitos previstos en la ley que regula al instituto de que se trate, lo que de manera alguna implica una restricción al citado derecho fundamental, en tanto existen otros mecanismos para acceder a tales servicios, como lo son los órganos públicos de salud y el Sistema de Protección Social en Salud, el cual está diseñado para todas aquellas personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud.

"'...

"'III. Limitación de los servicios de salud.

"'Como se mencionó al principio de este considerando, de acuerdo a la Ley General de Salud, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución General de la República, el derecho fundamental a la protección de la salud se traduce, en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que dentro de esos mecanismos se encuentran los regímenes de seguridad social previstos en el artículo 123 constitucional, regulados por las disposiciones legales que determinan su organización y funcionamiento, atendiendo a criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso; los servicios públicos a la población en general regidos por criterios de universalidad y gratuidad al momento de la prestación del servicio; y, el Sistema de Protección Social en Salud, diseñado para quienes no sean derechohabientes de los referidos institutos o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud.

"'En este sentido, es evidente que el derecho fundamental a la protección de la salud, contrario a lo que pretende demostrar la quejosa, no conlleva para los institutos de seguridad social la obligación indefectible de proporcionar a sus derechohabientes en cualquier momento y frente a cualquier circuns-

tancia los servicios de salud, ya que para ello es menester que se satisfagan los requisitos que para tal efecto se prevean en la ley que los regula.

"'Asimismo, tampoco asiste razón a la quejosa, en cuanto sostiene que es obligación del Estado proporcionar y financiar los servicios de salud, pues incluso, tratándose de los servicios públicos a la población en general y del sistema de protección social en salud, la ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 4o. constitucional, expresamente prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de esos servicios, excluyéndose de su cobro únicamente a las personas que carezcan de recursos económicos. …'

"De dichas consideraciones surgió la siguiente jurisprudencia:

"'Registro: 168549
"'Instancia: Pleno
"'Tesis: jurisprudencia
"'Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"'Tomo XXVIII, octubre de 2008
"'Materias: constitucional y administrativa
"'Tesis: P./J. 136/2008
"'Página: 61

"'SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL.—La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y

mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas; de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso.'[9]

---

[9] "Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

"Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

"Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

"Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

"Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva

"Las anteriores consideraciones, derivadas de la mencionada ejecutoria, si bien fueron expuestas al resolver el argumento que se hizo en relación a la inconstitucionalidad de la Ley del ISSSTE, específicamente al tema de los seguros de salud y riesgos de trabajo, 'en tanto condiciona la prestación de los servicios de salud consistentes, en atención médica preventiva, curativa y de maternidad, así como la rehabilitación física y mental a las reservas financieras y actuariales del seguro de salud y los demás que considere pertinentes, con base en un sistema de evaluación y seguimiento que calificará y propondrá asignaciones presupuestarias por resultados y procurará su equilibrio financiero, a pesar de que se trata de prestaciones que son fundamentales para la salud de los trabajadores y sus familias, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos a) y d) de la-fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, motivo por el cual, deben proporcionarse obligatoriamente por el Estado.', también es dable, bajo esos mismos argumentos, el resolver lo relativo a la inconstitucionalidad que se hace valer del artículo décimo transitorio, que realiza bajo el argumento, de que al aumentarse la edad mínima para tener derecho a la pensión se le priva a su derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. constitucional.

"Ello es así, porque el análisis que se realiza no sólo abarca aspectos financieros sino que se hace estudio del derecho a la salud, a partir de lo que establece la Constitución y la Ley General de Salud, que es la ley reglamentaria del artículo 4o., tercer párrafo, que establece las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud.

"Asimismo, se establece que los servicios de salud, en términos generales, son todas aquellas acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas y de la sociedad en general, y se consideran como servicios básicos la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo urgencias, así como la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

"Se hace una clasificación de los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, en:

Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 136/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho."

"a) Servicios públicos a la población general. Son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar tales servicios, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas.

"b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social. Son los prestados por éstas a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado en las mismas, conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios.

"Dichos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad social y por las contenidas en la Ley General de Salud, en lo que no se oponga a aquéllas.

"Los derechohabientes de las instituciones de seguridad social podrán acceder a los servicios de salud que prestan los establecimientos públicos de salud, en los términos de los convenios que al efecto se suscriban con dichas instituciones.

"c) Servicios sociales y privados. Son de carácter social los que se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos.

"Son privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos.

"d) Otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema.

"Conforme a lo anterior, se dijo que de acuerdo a dicha clasificación, el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, los cuales serán determinados por la ley relativa considerando las características de: a) los regímenes de seguridad social, que se fundan en los criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso; b) los sistemas de solidaridad social, que usan recursos fiscales, la cooperación comunitaria y la colaboración institucional; y c) los sistemas de asistencia, que descansan en el esfuerzo fiscal del Estado.

"Entonces, el hecho de que se haya determinado el incremento gradual de la edad para tener derecho a la pensión, de manera alguna implica una restricción al citado derecho fundamental, en tanto existen otros mecanismos para acceder a tales servicios, como lo son los órganos públicos de salud y el Sistema de Protección Social en Salud, el cual está diseñado para todas aquellas personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud; de ahí que tampoco se aprecie que lo dispuesto en el artículo décimo transitorio, en la porción normativa destacada, se dé un trato discriminatorio entre situaciones análogas.

"En ese orden de ideas, y toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió diversos amparos en revisión, en los que se señalaron como actos del Congreso de la Unión, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y secretario de Gobernación consistentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en la aprobación, promulgación, expedición y refrendo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, integrada por 254 artículos y 47 transitorios; así como del artículo 7o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, publicada el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, no resulta inconstitucional el artículo transitorio impugnado, dado que lo ahí establecido de ningún modo implica una restricción al derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco se vulneran sus derechos humanos a la igualdad y no discriminación, en los términos en que fue planteado su argumento.

"En otro orden, bajo la perspectiva de legalidad, se estima que lo resuelto por la autoridad responsable se encuentra apegado a derecho, por lo siguiente:

"En efecto, como lo consideró la Sala responsable, durante la vigencia de la abrogada Ley del ISSSTE, la actora sólo cumplió con el requisito de haber cotizado para el instituto demandado por más de quince años, pero no con el diverso requisito de haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad que se requerían para obtener la pensión jubilatoria, por lo que no puede considerarse que durante la vigencia de ese ordenamiento legal hubiere adquirido el derecho de obtener la pensión jubilatoria.

"El artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, establecía:

"'Artículo 66. El trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta ley.'

"De dicho precepto legal, se desprende que el trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado por más de quince años, podrá dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social con el propósito de que al cumplir los cincuenta y cinco años de edad se le otorgue la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios.

"En el caso, como correctamente lo consideró la Sala responsable –por así estar demostrado en autos–, la actora, ahora quejosa, causó baja y dejó de cotizar a partir del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, durante la vigencia de la abrogada Ley del ISSSTE, siendo que hasta esa fecha había cotizado por más de quince años –lo que se desprende de la hoja única de servicios que obra a fojas trece a la dieciséis–, pues ingresó el dieciséis de septiembre de mil novecientos setenta y siete y causó baja el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, pero sólo contaba con treinta y cuatro años de edad y no con los cincuenta y cinco años a que se refiere el artículo 66 de esa ley, por lo que era improcedente el otorgamiento de la pensión jubilatoria.

"Entonces, no puede determinarse que bajo la vigencia de la ley abrogada hubiere adquirido el derecho a obtener la pensión jubilatoria, porque en términos del artículo 48 de la abrogada ley, el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los

requisitos que la misma señala, pues mientras ello no ocurra, habrá sólo una expectativa de derecho, pero no un derecho adquirido.

"Ahora, es cierto que la actora, ahora quejosa, en el año dos mil trece –fecha en que solicitó el otorgamiento de pensión– cumplió los cincuenta y cinco años de edad a que se refería el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE para obtener la pensión jubilatoria; sin embargo, debe observarse que, para esa fecha ya había entrado en vigor la nueva ley de la materia que modificó el requisito relativo a la edad mínima.

"En la inteligencia, de que como ya fue apuntado, el incremento gradual de la edad a que se refiere el precepto transitorio invocado de la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no es violatorio al principio de progresividad ni de irretroactividad, conforme a las jurisprudencias invocadas al inicio de este considerando.

"En tales condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación, y dado que este tribunal no advierte infracción que amerite la suplencia de la queja de acuerdo con el artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal."

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Para que exista una contradicción de tesis es necesario que se cumplan las condiciones siguientes:

1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por reiteración en materia común 1a./J. 22/2010,

publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, con el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Además, cabe precisar que la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no estén expuestos formalmente como tesis, no es obstáculo para que el Pleno de este Trigésimo Circuito se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta con que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XIII, del mes de abril de dos mil uno, materia común, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, página 77, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado

por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

También sirve de sustento la tesis de jurisprudencia 2a./J. 94/2000, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en el Tomo XII, del mes de noviembre de dos mil, materia común, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, página 319, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Luego, para determinar si existe la contradicción de tesis, resulta indispensable tomar en cuenta los antecedentes y elementos esenciales de las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito.

En el juicio de amparo directo administrativo **********, fallado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se advierte que:

1. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado otorgó a **********, pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, con efectos a partir del diez de septiembre de dos mil once, por haber cotizado dieciséis años, siete meses y veintiocho días y contar con cincuenta y seis años de edad, ya que de la hoja de servicios se observa que cotizó para el instituto demandado por el periodo comprendido del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y siete al treinta y uno de diciembre de dos mil tres, y que en esta última fecha tenía cuarenta y ocho años de edad y no los cincuenta y cinco años que establecía la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para obtener la pensión jubilatoria.

2. La pretensión de la actora radica en el hecho de que la pensión que se le otorgó deberá surtir efectos a partir del año dos mil diez, en que cumplió los cincuenta y cinco años de edad a que se refiere el artículo 66 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, por ende, hacer el pago retroactivo, toda vez que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos.

3. En el juicio contencioso se resolvió que el artículo 66 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado disponía que, el trabajador que se separara del servicio después de haber cotizado, cuando menos, quince años, podría dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social con el fin de gozar de la prerrogativa de que, al cumplir los cincuenta y cinco años de edad a que se refiere el artículo 61 de la misma ley, se le otorgara la pensión jubilatoria; sin embargo, antes de que la actora cumpliera esa edad, se abrogó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que en el artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la nueva ley se establece que quien en el año dos mil diez y en el dos mil once, hubiese cotizado por más de quince años, deberá tener una edad de cincuenta y seis años para poder otorgarle pensión de retiro por edad y tiempo de servicios; estableciendo, asimismo, que esa edad se incrementaría en forma gradual conforme a la tabla ahí inserta.

4. La actora causó baja en el año dos mil tres, durante la vigencia de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando contaba con cuarenta y ocho años de edad; y dieciséis años, siete meses y veintiocho días de cotización; que en el dos mil diez cumplió los cincuenta y cinco años de edad, pero que en esa fecha ya había entrado en vigor la nueva Ley del ISSSTE, conforme a la cual se requería tener cincuenta y seis años de edad para otorgarle la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios.

5. En el juicio de amparo se declaró fundado el concepto de violación, por estimarse que le asiste razón a la quejosa, al señalar que el instituto demandado debió otorgarle la pensión jubilatoria conforme a las disposiciones de la abrogada Ley del ISSSTE y no de la ley vigente, ya que el treinta y uno de diciembre de dos mil tres cumplió con el requisito de haber cotizado por más de quince años, pero como aún no contaba con los cincuenta y cinco años de edad que se requerían para obtener la pensión jubilatoria, decidió acogerse a la prerrogativa establecida en el artículo 66 de la abrogada ley, en el sentido de dejar en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social para que una vez que alcanzara la edad requerida se le otorgara la pensión relativa.

6. Que la actora encuadraba exactamente en lo dispuesto en la norma y por ello decidió acogerse a la citada prerrogativa, en el sentido de dejar en el fondo de pensiones la totalidad de las aportaciones de seguridad social para que al cumplir con la edad requerida se le otorgara la pensión correspondiente.

7. El hecho de que el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, en que la actora dejó de cotizar para el instituto demandado, sólo contara con cuarenta y ocho años de edad, y no con los cincuenta y cinco años que exigía el citado precepto legal, le impidió, en esa fecha, solicitar el otorgamiento de la pensión jubilatoria, y por ello decidió acogerse a la prerrogativa o beneficio establecido en el citado precepto legal que regulaba la pensión relativa, pues dejó en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social para que cuando adquiriera la edad requerida se le otorgara la pensión jubilatoria.

8. Concluyó que bajo la vigencia de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la actora adquirió los derechos para que se le otorgara la pensión jubilatoria por edad y años de servicios, pues aunque todavía no tenía la edad requerida de cincuenta y cinco años, el precepto legal establecía que debía otorgársele la pensión, una vez que cumpliera esa edad, siempre y cuando no hubiere retirado del fondo de pensiones las cotizaciones de seguridad social, como en el caso ocurrió.

En el amparo directo administrativo **********, fallado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se desprende que:

1. ********** demandó la nulidad del oficio **********, de treinta y uno de mayo de dos mil trece, emitido por la jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Regional en la Zona Oriente del Distrito Federal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que se le negó la concesión de una pensión de retiro

por tiempo de servicios, ya que debía sujetarse a lo dispuesto en la fracción II, inciso b), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, esto es, en relación con la edad.

2. Al dictar sentencia, la autoridad responsable declaró la validez de la resolución impugnada.

3. En el juicio de amparo, con base en los conceptos de violación, se hizo un análisis de la fracción II, inciso b), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, bajo la perspectiva de los principios de progresividad, irretroactividad de la ley, igualdad y no discriminación, así como del relativo al derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional; conceptos que fueron declarados ineficaces.

4. Finalmente se hizo un análisis bajo la perspectiva de legalidad, donde se concluyó que si durante la vigencia de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la actora sólo cumplió con el requisito de haber cotizado para el instituto demandado por más de quince años, pero no con el diverso requisito de haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad que se requerían para obtener la pensión jubilatoria, entonces, no puede considerarse que durante la vigencia de ese ordenamiento legal hubiere adquirido el derecho de obtener la pensión jubilatoria.

5. Que del artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, se desprende que el trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado por más de quince años, podrá dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social, con el propósito de que al cumplir los cincuenta y cinco años de edad se le otorgue la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios.

6. Con base en el diverso 48 de la abrogada ley, el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala, pues mientras ello no ocurra, habrá sólo una expectativa de derecho, pero no un derecho adquirido.

7. Es cierto que la actora, en el año dos mil trece –fecha en que solicitó el otorgamiento de pensión– cumplió los cincuenta y cinco años de edad a

que se refería el artículo 66 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para obtener la pensión jubilatoria; sin embargo, debe observarse que para esa fecha ya había entrado en vigor la nueva ley de la materia que modificó el requisito relativo a la edad mínima.

En esas condiciones, de tales antecedentes, se observan los siguientes elementos comunes:

Se trata de trabajadores, no activos, que demandaron el pago de una pensión por edad y tiempo de servicios; ambos, se ubican en el supuesto de que los años de servicios los cumplieron bajo la vigencia de la ley abrogada; y lo relativo a la edad requerida –en aquel momento– la cumplieron cuando aquélla ya había sido abrogada.

Así, para el Primer Tribunal Colegiado de este Trigésimo Circuito si bajo la vigencia de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ex trabajador contaba con quince años de servicio y además dejó su fondo de aportaciones, desde ese momento adquirió el derecho al otorgamiento de una pensión jubilatoria por edad y años de servicios y, por ende, esa es la ley aplicable, pues aunque todavía no tenía la edad requerida de cincuenta y cinco años, el artículo 66 establecía que debía otorgársele la aludida pensión, una vez que cumpliera esa edad.

En cambio, para el Segundo Tribunal Colegiado de este Trigésimo Circuito, ante el mismo supuesto, considera que la ley aplicable será la vigente al momento en que se cumplan todos los requisitos que impone la norma, para adquirir el derecho a una pensión jubilatoria, por virtud de que la pensión nace, precisamente, en ese momento.

En tal contexto, debe decirse que, en el caso concreto, existe la contradicción de tesis denunciada, pues ha quedado de manifiesto que en la parte considerativa de las ejecutorias que emitieron los tribunales contendientes, ambos se ocuparon de una misma cuestión jurídica, a saber: cómo es que debe resolverse la pretensión de un trabajador, no estando activo, que solicitó el otorgamiento de una pensión por tiempo de servicios, por haber dejado de laborar y no disponer de sus fondos (actualizándose parcialmente algunos de los supuestos previstos en el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada) pero el requisito de la edad a que alude se cumplió ya estando vigente la nueva Ley del ISSSTE, la que ahora exige más de cincuenta y cinco años para el otorgamiento de la aludida pensión.

Por tanto, es de concluir que, el problema jurídico a resolver consiste, en determinar si debe o no acogerse a lo establecido en el artículo 66 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, si durante su vigencia se actualizó un requisito de los exigidos para adquirir el derecho al otorgamiento de una pensión jubilatoria, o será la ley vigente al momento en que se cumplan todos los requisitos, en el caso, lo establecido en el artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la actual ley.

Sin que se oponga a lo anterior, el hecho de que en la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de este Trigésimo Circuito, se haya realizado un análisis de la fracción II, inciso b), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, bajo la perspectiva de los principios de progresividad, irretroactividad de la ley, igualdad y no discriminación, así como del relativo al derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional; pues finalmente la contradicción de criterios resulta del análisis de legalidad que realizaron ambos órganos colegiados, y precisamente será a partir de ello que será analizada.

QUINTO.—Estudio de fondo. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por el Pleno de este Trigésimo Circuito, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En aras de informar su sentido, en primer lugar, conviene señalar que el sistema de pensiones fue modificado con la entrada en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a partir del uno de abril de dos mil siete, y entre otros cambios, se dieron los relativos a la pensión por edad y tiempo de servicios, ya que la edad requerida de cincuenta y cinco años se incrementaría de manera gradual hasta llegar a los sesenta años.

Precisa destacar, que ante la expedición de dicha ley surgieron un sinnúmero de juicios de amparo, los que a la postre fueron resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de los amparos en revisión, todos ellos relacionados con el nuevo sistema de pensiones establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, y de ello surgieron diversos criterios contenidos en las jurisprudencias que a continuación se identifican y transcriben:

"Novena Época
"Registro: 166382

"Instancia: Pleno
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXX, septiembre de 2009
"Materias: constitucional y laboral
"Tesis: P./J. 125/2008
"Página: 35

"ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).—Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, incluso, el artículo 48 de la ley derogada expresamente establecía que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En esa virtud, si el artículo décimo transitorio, para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1o. de enero de 2010, además de 30 años de cotización para los hombres y 28 años para las mujeres, establece como requisito 51 años de edad para los hombres y 49 para las mujeres, la que se incrementará de manera gradual hasta llegar a los 60 y 58 años respectivamente, en el año 2026, aumento que también se refleja para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de 56 a 60 años y para la de cesantía en edad avanzada de 61 a 65 años, igualmente de manera gradual, lo que implica que en relación con el sistema pensionario anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo."[10]

[10] "Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez

"Novena Época
"Registro: 166387
"Instancia: Pleno
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXX, septiembre de 2009
"Materias: constitucional y laboral
"Tesis: P./J. 108/2008
"Página: 28

"ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).—El nuevo régimen de seguridad social que prevé el citado ordenamiento legal en su integridad, por sí, no puede estimarse retroactivo en virtud de que rige hacia el futuro, es decir, a partir de que entró en vigor la ley reclamada. Por otra parte, por cuanto se refiere a los trabajadores que empiecen a cotizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con posterioridad al primero de abril de dos mil siete, es evidente que no puede estimarse que adquirieron algún derecho al amparo de la ley derogada y, por ende, la nueva ley en nada les afecta. Tratándose de los jubilados o pensionados con anterioridad a la fecha en comento y sus familiares derechohabientes, la ley reclamada no afecta los derechos que adquirieron durante

---

Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 125/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho."

la vigencia de la ley anterior, ya que en su artículo décimo octavo transitorio expresamente señala que éstos continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones precisados en las disposiciones vigentes en la época que se pensionaron; y en relación con los trabajadores que a la entrada en vigor de la ley reclamada se encontraran cotizando al instituto, el artículo quinto transitorio establece que podrán elegir entre mantenerse en el sistema de pensiones previsto en la ley de 1983 con ciertas modificaciones que se implementarán gradualmente, o bien, en migrar al nuevo sistema de 'cuentas individuales' mediante la entrega de un bono de reconocimiento de beneficios pensionarios, sin que obste a lo anterior el hecho de que los artículos primero y segundo transitorios establezcan que la ley de 1983 quedará abrogada cuando la nueva entre en vigor, puesto que, si el artículo décimo octavo transitorio precisa que quienes se hayan jubilado o pensionado con anterioridad a su entrada en vigor continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señaladas en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento, y en el artículo décimo transitorio se establecen modalidades al anterior sistema de pensiones que se implementarán gradualmente, es evidente que el ordenamiento legal citado en primer término en realidad se derogó parcialmente."[11]

---

[11] "Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 108/2008 la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho."

Ahora, de las ejecutorias que dieron origen a dichas jurisprudencias, es conveniente extraer lo que resolvió, específicamente, al analizar lo relativo al aumento de la edad mínima para tener derecho a una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada.

"I. Aumento de la edad mínima para tener derecho a una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, así como de la cuota respectiva.

"...

"Por otra parte, debe tenerse en cuenta que conforme a la teoría de los derechos adquiridos, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos, por lo que, mientras éstos no se cumplan, la pensión constituye una expectativa de derecho, de lo que se sigue que el incremento de la edad mínima para tener derecho a una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, no afecta derechos adquiridos.

"Incluso, destaca que el artículo 48 de la ley derogada expresamente señala que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta ley y satisfagan los requisitos que la misma señala.

"Asimismo, de acuerdo a la teoría de los componentes de la norma, la pensión es la consecuencia de una serie de supuestos parciales, por tanto, si tales supuestos se realizan con posterioridad a que entró en vigor la ley reclamada, es inconcuso que el otorgamiento de la pensión deberá realizarse en los términos previstos por ésta.

"En ese orden, es evidente que el hecho de que por virtud del aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, los trabajadores deban laborar más años, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, habida cuenta que dicha modificación no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley reclamada, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo."

Del análisis de las jurisprudencias, así como parte de la ejecutoria, transcritas, se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, al analizar la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consideró que las modificaciones al anterior sistema de pensiones no transgrede la garantía de irretroactividad de la ley, principalmente, por lo siguiente:

1. Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos; además, la pensión es la consecuencia de una serie de supuestos parciales, por tanto, si tales supuestos se realizan con posterioridad a que entró en vigor la ley, es inconcuso que el otorgamiento de la pensión deberá realizarse en los términos previstos por ésta.

2. El nuevo régimen de seguridad social que prevé la ley vigente, en su integridad, por sí, no puede estimarse retroactivo en virtud de que rige hacia el futuro.

3. El aumento de la edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, habida cuenta que dicha modificación no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley reclamada, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado, ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.

De lo anterior destaca que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social, no viola la garantía de irretroactividad de la ley, al considerar que conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión es una expectativa de derecho, habida cuenta que dicha modificación no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.

Ahora, el haber destacado lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es importante, porque si bien el análisis realizado está enfocado en la ley en sí misma; sin embargo, este Pleno de Circuito considera que las conclusiones a las que arribó nuestro Más Alto Tribunal también sirven de sustento para resolver el supuesto fáctico que se presentó ante los órganos colegiados de circuito contendientes.

En efecto, lo que propició a que se arribaran a conclusiones divergentes, surge de la particularidad de los asuntos: que durante la vigencia de la ley abrogada se cumplen tres requisitos establecidos en el artículo 66 de la aludida ley, esto es, que el trabajador se separe del servicio; que haya cotizado, cuando menos quince años; y haber dejado la totalidad de sus aportaciones; pero, el requisito concerniente a la edad (cincuenta y cinco años, exigidos en aquel tiempo) se cumplió una vez que ya había entrado en vigor la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la cual la edad se modificó para que se incrementara de manera gradual.

Ahora, para discernir el problema jurídico, esto es, cuál es la normatividad aplicable cuando se presente el supuesto fáctico planteado, debe partirse de la premisa de que la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos; de ahí que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya concluido en el sentido de que, mientras éstos no se cumplan, la pensión, cualquiera que sea su naturaleza, constituye una expectativa de derecho; lo cual ya no está a discusión por estar determinado jurisprudencialmente.

En el caso, el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados, abrogada, respecto del cual se pretende el otorgamiento de la pensión, es de contenido siguiente:

"Artículo 66. El trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta ley."

Dicho numeral contempla una serie de requisitos, y para obtenerla es indispensable que se cumplan todos.

Pero, en el supuesto fáctico, el requisito relativo a la edad –cincuenta y cinco años– que requería el aludido artículo 66, se cumplió una vez vigente la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en esta nueva ley, a partir del uno de enero de dos mil diez, la edad mínima se incrementa cada dos años hasta llegar a 60 años en el dos mil dieciocho. Es decir, cada dos años, se aumenta un año de edad, como se puede leer de la fracción II, inciso b), del artículo décimo transitorio, que dice:

"Décimo. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

"I. A partir de la entrada en vigor de esta ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve:

"…

"II. A partir del primero de enero de dos mil diez:

"…

"b) Los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al instituto, tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.

"El monto de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:

"…

"La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

"Años	Edad para pensión por edad y tiempo de servicios
"2010 y 2011	56
"2012 y 2013	57
"2014 y 2015	58
"2016 y 2017	59
"2018 en adelante	60 …"

Este Pleno de Circuito estima que el otorgamiento de la pensión solicitada deberá atender a lo dispuesto en el aludido artículo transitorio.

Lo anterior es así, partiendo del supuesto de que al analizar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo relativo a la irretroactividad de

la ley, en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social, de acuerdo a la teoría de los componentes de la norma concluyó que no se daba violación alguna a ese derecho humano, puesto que consideró que la pensión es una consecuencia de una serie de supuestos parciales, por tanto, si tales supuestos se realizan con posterioridad a que entró en vigor la ley reclamada, es inconcuso que el otorgamiento de la pensión deberá realizarse en los términos previstos por ésta.

Bajo esta premisa, el aludido artículo 66 establece los requisitos para tener derecho al otorgamiento de una pensión por edad y tiempo de servicios; a saber:

1. Que el trabajador se separe del servicio;

2. Que haya cotizado, cuando menos quince años;

3. Dejar la totalidad de sus aportaciones; y,

4. Cumplir con la edad requerida para la pensión, que en el caso es la de cincuenta y cinco años; edad que se obtiene de lo que establecía el diverso numeral 61 de la propia ley abrogada.[12]

En el caso, se cumplió con lo relativo a la separación del servicio, los años de servicios y no se dispuso de los fondos de aportaciones, con lo que se actualizan parcialmente los supuestos previstos.

Luego, si el requisito de la edad a que alude ese precepto (cincuenta y cinco años) se cumplió ya estando vigente la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es inconcuso que deberá atenderse a lo dispuesto por ésta, y no a lo que establecía la ley abrogada, porque se trata de un requisito que aún no se había actualizado, y por ende, tampoco se había ubicado totalmente en el supuesto de la norma, en el entendido de que la pensión es una mera expectativa de derecho, y no es sino hasta el momento en que se cumplen todos cuando se puede acceder a ésta.

Entonces, si una persona, antes de que entrara en vigor la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

---

[12] "Artículo 61. Tienen derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, los trabajadores que habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al instituto."

–uno de abril de dos mil siete– se separó del servicio, cotizó cuando menos quince años y dejó la totalidad de sus aportaciones, pero no cumplía con la edad que previamente se requería, al no ubicarse dentro del supuesto de la norma, todavía no tiene derecho a la pensión, y entonces, se encuentra ante una expectativa de derecho, y al cumplirse la hipótesis relativa a la edad, ésta ya había sido modificada, luego, para tener derecho a la pensión deberá ubicarse en el nuevo supuesto; habida cuenta que no se desconocen los diversos requisitos que ya se encontraban actualizados, como son la separación del servicio, los años de cotización y el haber dejado sus aportaciones.

Sin que pueda estimarse, como lo consideró uno de los tribunales colegiados de circuito, de que por el hecho de haber dejado en el fondo de pensiones las aportaciones de seguridad social se acogió a la prerrogativa establecida en el artículo 66 de la abrogada ley, esto es, que una vez alcanzada la edad de cincuenta y cinco años tendría derecho a ella, con independencia de su modificación.

Ello es así, porque dicha prerrogativa no puede tener el alcance de que a partir de haber optado por ella, desde ese momento se le haya concedido la pensión, y se pueda entender como un derecho adquirido, pues como se ha analizado a lo largo de esta ejecutoria, la pensión no se adquiere hasta el momento en que se cumplen todos los requisitos, y entre ellos se encuentra lo relativo a la edad; luego, para estimar que se está ante un derecho adquirido deberá cumplirse con todos los requisitos, pues mientras tanto, se está ante una mera expectativa de derecho.

Con base en lo anterior, es por lo que no puede estimarse aplicable la tesis X.A.T.63 L, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, en la cual se fundamentó uno de los órganos colegiados de circuito involucrados en la presente contradicción de tesis, que puede consultarse en el Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2366, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro: "JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. SI SE APLICA UN REGLAMENTO QUE ENTRÓ EN VIGOR POSTERIORMENTE A LA FECHA EN LA CUAL AQUÉLLA SE HABÍA AUTORIZADO, SE AFECTAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DEL DEMANDANTE Y SE VIOLA SU GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.",[13]

[13] Texto. "El beneficio de la jubilación debe concederse bajo el reglamento de trabajo vigente cuando la solicitud, autorización y vacaciones prejubilatorias que se autorizaron abarcaron periodos anteriores a la fecha en que entró en vigor un nuevo ordenamiento, razón por la cual

pues como puede observarse, dicho criterio parte del supuesto de que al momento en que fue modificado el reglamento la pensión ya había sido autorizada, lo que, como ya se dijo, no sucede en el caso; respecto de lo cual, se insiste, la pensión constituye una mera expectativa de derecho.

En consecuencia, este Pleno del Trigésimo Circuito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 215, 216, párrafo segundo, 225, y 226, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, considera que la tesis que debe prevaler con carácter de jurisprudencia, es la siguiente:

PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 108/2008 y P./J. 125/2008, determinó que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social, no viola el principio de irretroactividad de la ley, al considerar que a partir de la teoría de los derechos adquiridos la pensión, al no ser un derecho que adquieran los trabajadores cuando empiezan a laborar y cotizar al instituto, se traduce en una expectativa de derecho. Con base en dicho criterio si un trabajador, no activo, solicitó el otorgamiento de una pensión por edad y tiempo de servicio, por haber dejado de laborar y haber cotizado, cuando menos 15 años, y no disponer de sus fondos, actualizándose parcialmente los supuestos

---

los trámites efectuados con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador fue jubilado, ya le generaron un derecho adquirido, dado que la jubilación ya estaba autorizada; de ahí que no se está en presencia de una mera expectativa de derecho, porque ya estaba concretada su jubilación desde la data de la autorización, en la cual estaba vigente el reglamento de trabajo anterior al nuevo de uno de agosto de dos mil, esto es, el beneficio ya había sido autorizado en términos del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente del 1o. de agosto de 1993 al 31 de julio de 2000. Por tanto, los aspectos que deben considerarse para determinar la aplicabilidad de un reglamento en lugar de otro, son: a) que la solicitud de jubilación sea presentada durante la vigencia de ese reglamento, b) que la autorización se otorgue con base en el mismo reglamento y, c) que las vacaciones prejubilatorias, en su caso, también se hayan autorizado con base en ese reglamento. En consecuencia, si el reglamento de trabajo que se aplicó al demandante para otorgarle su jubilación entró en vigor con posterioridad a la fecha en la cual se le había autorizado, afecta sus derechos adquiridos y viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional."

previstos en el artículo 66 de la ley abrogada, pero el requisito de la edad contenido en ese precepto (55 años) se cumplió estando vigente la nueva ley, debe atenderse a lo dispuesto en esta última, que incrementó gradualmente la edad para otorgar la aludida pensión, y no a la abrogada, pues se está ante una mera expectativa de derecho, y se trata de un supuesto que se cumplió con posterioridad a que entró en vigor la ley.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis.

SEGUNDO.—Sí existe contradicción entre los criterios sustentados, en los términos precisados en el considerando quinto de esta ejecutoria.

TERCERO.—Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno del Trigésimo Circuito, en los términos de la tesis redactada en el último considerando del presente fallo.

CUARTO.—Dése publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, en términos del artículo 219 de la Ley de Amparo.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese esta terminación a los Tribunales Colegiados contendientes, y en su oportunidad, archívese el toca de la contradicción como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Trigésimo Circuito, por mayoría de tres, con la votación siguiente: los Magistrados Lucila Castelán Rueda, Álvaro Ovalle Álvarez y José Luis Rodríguez Santillán, en favor del proyecto, y los Magistrados Esteban Álvarez Troncoso, Miguel Ángel Alvarado Servín y Silverio Rodríguez Carrillo, en contra del proyecto. Ante el empate, la Magistrada Lucila Castelán Rueda, en su carácter de presidenta y de conformidad con el artículo 42 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hizo valer el voto de calidad en el mismo sentido de su voto.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular que formula el Magistrado Esteban Álvarez Troncoso en la contradicción de tesis 4/2014 del índice del Pleno del Trigésimo Circuito.

No comparto el criterio prevaleciente, por mayoría calificada, que coincide con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado, para la solución de la presente contradicción de tesis.

En principio, aunque no se señaló en el proyecto presentado, el suscrito, al resolverse el amparo directo administrativo 825/2014 del índice del Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, en sesión de treinta de octubre de dos mil catorce, ya me había apartado del criterio sustentado por el tribunal, lo cual así expresé en su oportunidad, en el voto en contra que al efecto se anexó a la ejecutoria en cuestión.

Por ello, en similares términos formularé este voto particular, toda vez que las ideas externadas en la sesión relativa, que a la postre conformaron el criterio prevaleciente, por mayoría calificada, que coincide con el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado, no resultaron convincentes para el suscrito.

Como preámbulo, con el fin de evitar confusiones, se debe anticipar que, desde mi óptica, en los asuntos contendientes no está planteado un problema de retroactividad de la ley, en sí misma considerada, sino ante la aplicación retroactiva de hipótesis normativa, como lo es el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior son hipótesis que deben distinguirse claramente pues, según el caso, requieren de un tratamiento distinto. No obstante el proyecto presentado que es una reiteración casi literal del emitido por el órgano de mi adscripción, se aplican al caso concreto criterios respecto de retroactividad de leyes y ciertos principios que están vinculados en ese supuesto.

Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285 del tomo XXXIII, abril de 2011, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, cuyos rubros y texto son los siguientes:

"RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.—El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular."

Como puede advertirse del criterio transcrito, se ha distinguido entre la retroactividad de la ley y su aplicación retroactiva, pues el estudio de la primera implica establecer si una norma se actualiza respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor y en el segundo, la aplicación retroactiva de una ley supone verificar que los actos estén fundados en normas vigentes, se aplican a hechos pasados.

En la especie, la litis del presente asunto, versa en determinar si el artículo décimo transitorio, fracción II, inciso b), de la Ley del ISSSTE vigente es aplicable o no, tratándose

de un trabajador que se separó del servicio bajo la vigencia de la abrogada Ley del ISSSTE, cumpliendo con los requisitos que al efecto establecía el artículo 66, pero la edad respectiva cuando la ley ya estaba abrogada. Lo anterior se refiere a la jubilación por edad y años de servicio.

Por lo anterior, será necesario el estudio de los requisitos que prevé el artículo 66 abrogado, para establecer si se deben considerar derechos adquiridos o simples expectativas de derechos.

El artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, en lo que interesa señala:

"Décimo. A los trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

"…

"II. A partir del primero de enero de dos mil diez:

"b) Los trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios."

"El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:

"15 años de servicio	50 %
"16 años de servicio	52.5 %
"17 años de servicio	55 %
"18 años de servicio	57.5 %
"19 años de servicio	60 %
"20 años de servicio	62.5 %
"21 años de servicio	65 %
"22 años de servicio	67.5 %
"23 años de servicio	70 %
"24 años de servicio	72.5 %
"25 años de servicio	75 %
"26 años de servicio	80 %
"27 años de servicio	85 %

"28 años de servicio	90 %
"29 años de servicio	95 %

"La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

"Años	Edad para pensión por edad y tiempo de servicios
"2010 y 2011	56
"2012 y 2013	57
"2014 y 2015	58
"2016 y 2017	59
"2018 en adelante	60."

De la transcripción del artículo décimo transitorio, se obtiene que para obtener un derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, se requiere un periodo mínimo de cotización de quince años o más y una edad mínima de cincuenta y cinco años, la que a partir del uno de enero de dos mil diez se incrementará cada dos años hasta el dos mil dieciocho, para llegar a una edad mínima de sesenta años.

Por su parte, los artículos 48, 61 y 66 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete) disponían lo siguiente:

"**Artículo 48.** El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta ley y satisfagan los requisitos que la misma señala."

"**Artículo 61.** Tienen derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, los trabajadores que habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al Instituto."

"**Artículo 66.** El trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta Ley."

De los artículos transcritos se advierte que, el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la ley señala; que tendrán derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios los trabajadores que habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicios como mínimo e igual tiempo de cotización al Instituto, y que el trabajador que se separe del

servicio después de haber cotizado por más de quince años, podrá dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social con el propósito de que al cumplir la edad requerida (cincuenta y cinco años) se le otorgue la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios.

Aquí se debe considerar, que la prerrogativa a que se refiere, en principio es el beneficio de que aunque "se separe", gozará de la prorrogativa de una pensión y condicionaba a que al cumplir la edad requerida, se le otorgase la misma, lo que quiere decir, que se reconoce un derecho a su otorgamiento, aun y cuando se separe, y la edad vigente en ese entonces, era de cincuenta y cinco años.

Así, del numeral 66 de la anterior ley, se pueden desglosar los siguientes requisitos para tener la prerrogativa[1] de gozar de pensión jubilatoria, al cumplir los 55 años:

– Que el trabajador se separe del servicio.

– Que haya cotizado, al menos quince años.

– Que deje el total de sus aportaciones en el fondo de pensiones.

Cierto, sin que el hecho de que se condicione a que cumpla con la edad de cincuenta y cinco años, signifique que hasta que tenga esa edad se constituya el derecho a obtenerla, pues la obtuvo como prerrogativa, ya que incluso se prevé que si el trabajador fallece antes, se le otorgará a sus familiares la pensión correspondiente, lo que corrobora que ya existe un derecho adquirido, y no era necesario esperar, en reducción al absurdo, a los 55 hipotéticos cumplidos, aunque estuviese fallecido. Esto, porque como se ha dicho los requisitos y el derecho existe y lo que se espera es la consecuencia, y sostener lo contrario implicaría que si muriese una persona sin cumplir los 55 años, no tendría derecho alguno; sin embargo, al cumplirse esa condición, del fallecimiento, se le otorga la pensión.

De acuerdo con lo anterior, como se dijo, el numeral 66, prevé una condición específica, que es la "separación del servicio" (a diferencia del diverso 61 y que es genérico) y que en ese momento no se tenga la edad de cincuenta y cinco años, sin embargo, también se prevé un privilegio (prerrogativa) que es que a condición de dejar sus aportaciones de seguridad social, al cumplir la edad requerida, conforme al artículo 61 transcrito (que era de cincuenta y cinco años), se le otorgue su pensión.

Ahora bien, es verdad que conforme al artículo 61 de la abrogada Ley del ISSSTE se prevén dos requisitos para tener el derecho a la pensión, como lo es la edad de cincuenta y cinco años y quince años de cotización, sin embargo, tal hipótesis se refiere a los trabajadores que estando activos (que no se hayan separado) puedan tener esos requisitos, pues resulta ilógico exigírselos a una persona cuando no reuniéndolos se da de baja. Por ello, es que el legislador previó en el artículo 66 señalado, la hipótesis de los trabajadores que se hayan dado de baja, también pudiesen tener el derecho a la jubilación, con los requisitos de ley, como refería el citado artículo 48 de la ley abrogada.

---

[1] Según el *Diccionario de la Real Academia Española*, consultado en el sitio web: *http://lema.rae.es/drae/?val=prerrogativa*, el término prerrogativa significa: Privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello, anejo regularmente a una dignidad, empleo o cargo.

Por tanto, la solicitud de pensión debe ajustarse al artículo 66 vigente en la época que se dio de baja en armonía con el diverso artículo 61 señalado, y no exigir más años, como se prevé en la actualidad, para obtener tal beneficio, pues en ese supuesto, implicaría la aplicación retroactiva de normas que no existían en esa fecha.

Es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias bajo los rubros: "ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).",[2] "ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)."[3] e "ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES Y EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO VIOLAN NORMAS INTERNACIONALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).",[4] pero las mismas se enfocan al estudio de la ley en sí misma, y no analizan la hipótesis casuística de que se trata, sino que se determina que la ley no es retroactiva, porque respeta la antigüedad y años de cotización, y que no viola la igualdad o la progresividad; sin embargo, la aplicación retroactiva del artículo décimo transitorio no se analiza, ni si el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE genera derechos o son meras expectativas, en relación con la edad requerida.

En este orden, se debe agregar que el derecho que se genera en la esfera jurídica del gobernado no es simple y llanamente la posibilidad de una pensión, porque ciertamente como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis: «P./J. 125/2008» "ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)."[5]

---

[2] Jurisprudencia. Novena Época. Pleno. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 35. P./J. 125/2008.

[3] Jurisprudencia. Novena Época. Pleno. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 28, P./J. 108/2008.

[4] Jurisprudencia. Novena Época. Pleno. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 37, P./J. 124/2008.

[5] Texto: "Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, incluso, el artículo 48 de la ley derogada expresamente establecía que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En esa virtud, si el artículo décimo transitorio, para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1o. de enero de 2010, además de 30 años de cotización para los hombres y 28 años para las mujeres, establece como requisito 51 años de edad para los hombres y 49 para las mujeres, la que se incrementará de manera gradual hasta llegar a los 60 y 58 años respectivamente, en el año 2026, aumento que también se refleja para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de 56 a 60 años y para la de cesantía en edad avanzada de 61 a 65 años, igualmente de manera gradual, lo que implica que en relación con el sistema pensionario

Tal derecho no se genera por el inicio del trabajo, ni por cotizar, sino por las cualidades específicas de años de servicio o cotización y la edad; no obstante, el texto del referido artículo 66 del ordenamiento señalado, otorga un "privilegio o gracia" de que bastaba dejar sus aportaciones para que cumplidos cincuenta y cinco años, tuviesen derecho al otorgamiento de la pensión, y esa prerrogativa es lo que constituye el derecho adquirido y no una expectativa; vinculado obviamente, con la edad que se preveía de cincuenta y cinco años, pues no existía otra.

Si se ve desde la óptica simple de los requisitos para obtener la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, lógico es que se exijan los dos requisitos y que si falta alguno sea improcedente, pero se insiste, el propio artículo 66, es una excepción a la regla genérica del artículo 61, ambos de la abrogada Ley del ISSSTE, pues en éste se prevén "55 años cumplidos" y en aquél, la prerrogativa de que al cumplirlos, conforme a este artículo, se le otorgaría su pensión.

Así, si posteriormente se abroga la Ley del ISSSTE vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y ahora se le exigen más años para pensionarse por edad y tiempo de servicios, porque así lo prevé la nueva ley, las condiciones en que se dio de baja y dejó sus aportaciones de seguridad social, es lo que debe imperar, con el beneficio o "prerrogativa" que el propio texto del artículo preveía, de que "al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma", la cual (la edad) estaba contenida en el diverso artículo 61 del mismo ordenamiento, y no se preveía ninguna otra.

Por tanto, no puede considerarse que por razón del transcurso del tiempo, se hayan entonces sí cumplidos los 55 años, y haya entrado en vigor la nueva Ley del ISSSTE, en automático quede sujeto a nuevas obligaciones para obtener su pensión, ya que tenía un derecho, sin que se considere expectativa y, por ello, no debe aplicar el artículo décimo transitorio.

Lo cual incluso se ve corroborado en términos de la teoría de los componentes de la norma, por virtud de que, si toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que al realizarse el supuesto, se produce la consecuencia, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes.

Así, de acuerdo al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[6] las hipótesis que pueden generarse, a través del tiempo son:

---

anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo."

[6] Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 123/2001, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 16, de rubro y texto siguientes: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.—Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta

1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia, sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley.

2. Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.

3. Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.

---

debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan."

4. Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley, no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición).

En el caso en concreto, si bajo el amparo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete), se actualizaron los supuestos de que un trabajador que contaba con más de quince años de servicio, se hubiera separado y dejado en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones, la consecuencia debe ser que al cumplir la edad requerida (cincuenta y cinco años) se le otorgue la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios, sin que la nueva ley pueda suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las diversas modalidades señaladas en esta última.

Así por ejemplo, si la actora, se separó del servicio el quince de abril de dos mil, fecha en que causó baja, dejando sus aportaciones en el fondo de pensiones, habiendo cotizado por más de quince años y con una edad de cuarenta y tres años de edad, es inconcuso que se situó en la hipótesis normativa del artículo 66 de la anterior Ley del ISSSTE, con objeto de que al cumplir con la edad de cincuenta y cinco años se le otorgara la pensión.

De esto se sigue, que bajo la vigencia de la abrogada Ley del ISSSTE la actora adquirió los derechos para que se le otorgara la pensión jubilatoria por edad y años de servicios, por virtud de que como ha quedado visto, ese precepto legal establecía que debía otorgársele la pensión una vez que cumpliera la edad requerida (obligatoria al momento de los hechos), siempre y cuando no hubiere retirado del fondo de pensiones las cotizaciones de seguridad social

Sin que lo anterior contraríe lo dispuesto en el artículo 48 de la abrogada Ley del ISSSTE,[7] por virtud de que la prerrogativa a gozar de la pensión por edad y retiro, nació precisamente cuando la trabajadora se separó del servicio, habiendo cotizado más de quince años y dejado sus aportaciones de seguridad en el fondo de pensiones, por lo cual al satisfacerse los requisitos señalados por el artículo 66 multicitado, la accionante tenía un derecho adquirido.

No se soslaya que pudiese considerarse que la expectativa de derecho lo constituye el paso del tiempo y hasta cumplir la edad requerida, como eventualidad, lo cual como aspecto genérico y de esos dos requisitos, edad y cotización prevé el artículo 61 del ordenamiento abrogado, sin embargo, no debe perderse de vista que el texto del artículo 66 sí prevé una prerrogativa de que, al cumplir la edad requerida se le otorgue la misma, y aunque no se señala literal o expresamente 55 años, lo cierto es que el

[7] "**Artículo 48.** El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y satisfagan los requisitos que la misma señala."

primero de los artículos señalados, y al final del propio 66, aunque referido al fallecimiento, no hay lugar a dudas, que la edad que se preveía era de 55 años y quince de cotización; también pudiese pensarse que la prerrogativa o beneficio, no está dirigida a la obtención de la pensión a los 55 años, sino que tal beneficio se refería exclusivamente a que aun estando dado de baja, podía aspirar a la obtención de una pensión aunque no trabajara y bastaba que dejara en el fondo de pensiones las aportaciones de las cotizaciones correspondientes a más de quince años, sin embargo, en cualquiera de los casos, se trataría de derechos adquiridos, por lo que se ha señalado.

Si bien el artículo 48 de la ley abrogada refiere que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esa ley y satisfagan los requisitos que la misma señala, lo que se preveía era que conforme al artículo 66 de la misma ley, en 55 años, se jubilaría por edad y años de servicios, entonces si la ley fue abrogada y así se ubicó en la hipótesis legal debe regirse por el propio artículo 66 señalado.

Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 9/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 2987 del Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, materia laboral, Décima Época, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro y textos siguientes:

"PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. EL REGLAMENTO DE TRABAJO DE SU PERSONAL DE CONFIANZA APLICABLE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN (EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS), ES EL QUE ESTÉ VIGENTE AL MOMENTO EN QUE EL TRABAJADOR DA POR TERMINADA SU RELACIÓN LABORAL.—Conforme al artículo 82, fracción I, de los Reglamentos de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente hasta el 31 de julio de 2000 y en vigor a partir del 1o. de agosto siguiente, los trabajadores de confianza podrán recibir la pensión jubilatoria cuando satisfagan los requisitos de procedencia, esto es, haber cumplido 55 años de edad y 25 de servicios, derecho que se encuentra condicionado a la terminación de la relación de trabajo con el patrón; pues mientras aquél continúe ligado a la relación laboral estará manifestando su deseo de no obtener todavía una pensión jubilatoria y, como consecuencia de ello, éste no estará obligado a concederla. Así, como las normas que contienen prestaciones extralegales son de interpretación estricta, la obligación del patrón de otorgar la pensión jubilatoria a un trabajador de confianza que satisfizo los requisitos de edad y años de servicios, está supeditado a que éste termine voluntariamente la relación de trabajo, en cuyo caso la regla aplicable para su otorgamiento será la vigente al momento de la separación."

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que a partir del uno de abril de dos mil siete se hubiere abrogado la anterior Ley del ISSSTE y que en sustitución de ese ordenamiento legal hubiere entrado en vigor la actual Ley del ISSSTE en cuyo artículo décimo transitorio, facción II, inciso b),[8] se establece que quienes en el año dos mil doce y en el dos

[8] "Décimo. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:
"…

mil trece hubieren cotizado por más de quince años, deberán contar con cincuenta y siete años de edad para tener derecho al otorgamiento de la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios, por virtud de que la accionante no solicitó una pensión jubilatoria por cumplir con ese supuesto de pensión directa en términos de lo ahí señalado, sino con motivo de que, precisamente bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE se separó del servicio, teniendo más de quince años de cotización y dejando sus aportaciones de seguridad social en el fondo de pensiones y que a la fecha ya cumplió con la edad de cincuenta y cinco años.

Lo anterior, al margen de que dicho artículo décimo transitorio resulte aplicable a los trabajadores que no hayan optado por el artículo décimo transitorio, o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus cuentas individuales, ya que el derecho de la accionante a obtener una pensión no deriva de éste, sino de lo dispuesto por la abrogada Ley del ISSSTE en su artículo 66.

De ahí que tenga que analizarse la procedencia del otorgamiento de la pensión a la luz de lo dispuesto en el artículo 66 de la abrogada Ley del ISSSTE, ya que de no hacerlo

---

"II. A partir del primero de enero de dos mil diez:
"…
"b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.
"El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:

"15 años de servicio	50 %
"16 años de servicio	52.5 %
"17 años de servicio	55 %
"18 años de servicio	57.5 %
"19 años de servicio	60 %
"20 años de servicio	62.5 %
"21 años de servicio	65 %
"22 años de servicio	67.5 %
"23 años de servicio	70 %
"24 años de servicio	72.5 %
"25 años de servicio	75 %
"26 años de servicio	80 %
"27 años de servicio	85 %
"28 años de servicio	90 %
"29 años de servicio	95 %

"La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

"Años	Edad para pensión por edad y tiempo de servicios
"2010 y 2011	56
"2012 y 2013	57
"2014 y 2015	58
"2016 y 2017	59
"2018 en adelante	60."

así, se modificarían o alterarían los derechos adquiridos o supuestos jurídicos y sus consecuencias que nacieron bajo la vigencia de la ley anterior, en contravención del derecho fundamental de irretroactividad previsto en el párrafo primero del artículo 14 constitucional.

Todo lo anterior, fue lo que motivó apartarme del criterio de la mayoría calificada.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular que formula el Magistrado Miguel Ángel Alvarado Servín, en relación a la contradicción de tesis 4/2014 del Pleno del Trigésimo Circuito.

En sesión pública de seis de marzo de dos mil catorce, el Pleno de este Trigésimo Circuito resolvió la contradicción de tesis 4/2014, cuyo tema consistió en definir si los trabajadores que se acogieron a la prerrogativa establecida en el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) abrogada, deben obtener su pensión conforme a los requisitos de ésta, o bien, de acuerdo a la Ley del ISSSTE vigente a partir del uno de abril de dos mil siete.

En principio, se estima oportuno señalar que, el criterio de los tribunales contendientes fue en el sentido siguiente:

1. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito sostuvo que, si algún trabajador contaba con quince años de servicio y dejó su fondo de aportaciones; desde ese momento adquirió el derecho al otorgamiento de una pensión jubilatoria por edad y años de servicios y, por ende, es aplicable la Ley del ISSSTE abrogada, pues aunque todavía no tenía la edad requerida de 55 años, el artículo 66 de dicho cuerpo normativo establecía que, debía otorgársele la aludida pensión, una vez que cumpliera esa edad.

2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito estimó que, ante el mismo supuesto, debe aplicarse la Ley del ISSSTE vigente al momento en que se cumplan todos los requisitos que impone la norma, para adquirir el derecho a una pensión jubilatoria, por virtud de que la pensión nace, precisamente, en ese momento.

El asunto se falló –con el voto de calidad de la Presidenta del Tribunal, Magistrada Lucila Castelán Rueda–, en el sentido de que debía adoptarse esencialmente la postura del Segundo Tribunal Colegiado, bajo el argumento de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en ocasiones anteriores, que la Ley del ISSSTE vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social, no viola la garantía de irretroactividad de la ley, al considerar que conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión es una expectativa de derecho, habida cuenta que dicha modificación no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la

entrada en vigor de la ley, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.

Y que, por tanto –se dijo–, partiendo de la premisa de que la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos; debe estimarse que si una persona, antes de que entrara en vigor la Ley del ISSSTE –uno de abril de dos mil siete– se separó del servicio, cotizó cuando menos quince años y dejó la totalidad de sus aportaciones, pero no cumplía con la edad que previamente se requería (cincuenta y cinco años), al no ubicarse dentro del supuesto de la norma, todavía no tenía derecho a la pensión, y entonces, se encuentra ante una expectativa de derecho, y al cumplirse el supuesto relativo a la edad, ésta ya había sido modificada, luego, para tener derecho a la pensión deberá ubicarse en el nuevo supuesto, esto es, conforme a la nueva Ley del ISSSTE.

Disiento del criterio adoptado en el caso concreto, por los motivos siguientes:

Es verdad que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la pensión no constituye un derecho adquirido sino una simple expectativa de éste; sin embargo, ello **lo hace bajo una óptica distinta a la hipótesis que es motivo de la presente controversia**, tal como se desprende de los propios criterios que fueron invocados en la resolución aprobada por la mayoría del Pleno de este Trigésimo Circuito, y que para mayor ilustración se transcriben a continuación:

"Novena Época
"Registro: 166382
"Instancia: Pleno
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXX, septiembre de 2009
"Materias: constitucional y laboral
"Tesis: P./J. 125/2008
"Página: 35

"ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).—Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos, incluso, el artículo 48 de la ley derogada expresamente establecía que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En esa virtud, si el artículo décimo transitorio, para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1o. de enero de 2010, además de 30 años de cotización para los hombres y 28 años para las mujeres, establece como requisito 51 años de edad para los hombres y 49 para las mujeres, la que se incrementará de manera gradual hasta llegar a

los 60 y 58 años respectivamente, en el año 2026, aumento que también se refleja para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de 56 a 60 años y para la de cesantía en edad avanzada de 61 a 65 años, igualmente de manera gradual, lo que implica que en relación con el sistema pensionario anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo."[1]

"Novena Época
"Registro: 166387
"Instancia: Pleno
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXX, septiembre de 2009
"Materias: constitucional y laboral
"Tesis: P./J. 108/2008
"Página: 28

"ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983,

---

[1] "Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.
"El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 125/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho."

NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).—El nuevo régimen de seguridad social que prevé el citado ordenamiento legal en su integridad, por sí, no puede estimarse retroactivo en virtud de que rige hacia el futuro, es decir, a partir de que entró en vigor la ley reclamada. Por otra parte, por cuanto se refiere a los trabajadores que empiecen a cotizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con posterioridad al primero de abril de dos mil siete, es evidente que no puede estimarse que adquirieron algún derecho al amparo de la ley derogada y, por ende, la nueva ley en nada les afecta. Tratándose de los jubilados o pensionados con anterioridad a la fecha en comento y sus familiares derechohabientes, la ley reclamada no afecta los derechos que adquirieron durante la vigencia de la ley anterior, ya que en su artículo décimo octavo transitorio expresamente señala que éstos continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones precisados en las disposiciones vigentes en la época que se pensionaron; y en relación con los trabajadores que a la entrada en vigor de la ley reclamada se encontraran cotizando al instituto, el artículo quinto transitorio establece que podrán elegir entre mantenerse en el sistema de pensiones previsto en la ley de 1983 con ciertas modificaciones que se implementarán gradualmente, o bien, en migrar al nuevo sistema de 'cuentas individuales' mediante la entrega de un bono de reconocimiento de beneficios pensionarios, sin que obste a lo anterior el hecho de que los artículos primero y segundo transitorios establezcan que la ley de 1983 quedará abrogada cuando la nueva entre en vigor, puesto que, si el artículo décimo octavo transitorio precisa que quienes se hayan jubilado o pensionado con anterioridad a su entrada en vigor continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señaladas en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento, y en el artículo décimo transitorio se establecen modalidades al anterior sistema de pensiones que se implementarán gradualmente, es evidente que el ordenamiento legal citado en primer término en realidad se derogó parcialmente."

Es decir, el Alto Tribunal del País ha establecido que no es posible estimar que la pensión sea un derecho que adquieren los trabajadores al momento de comenzar a laborar y cotizar al instituto (ISSSTE), dado que ello se encuentra condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos; situación con la que estamos totalmente de acuerdo con la anterior premisa, pues ciertamente, no sería válido estimar que deba reconocerse a una persona el derecho a pensionarse con base en las leyes vigentes en ese momento, por el simple hecho de que inicie a laborar y cotizar ante el mencionado instituto.

Empero, a juicio del suscrito Magistrado, en la especie subyace una hipótesis diversa de carácter excepcional que no puede resolverse bajo esa misma lógica, pues no debe olvidarse que existe una norma que **otorgaba expresamente un derecho al trabajador para que pudiera optar por separarse del servicio** después de haber cotizado cuando menos quince años al instituto (ISSSTE) y esperara a cumplir con la edad de cincuenta y cinco años para poder recibir su pensión.

En efecto, el artículo 66 de la Ley de ISSSTE abrogada disponía lo siguiente:

"**Artículo 66.** El trabajador que se separe del servicio después de haber cotizado cuando menos 15 años al Instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto

de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la edad requerida para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta Ley."

De la exégesis de dicho numeral se desprende, no una expectativa de derecho a la pensión, sino una verdadera prerrogativa establecida por el propio legislador para aquellos trabajadores que decidieron en su momento separarse del servicio, bajo el entendido de que tenían que esperar tan sólo a cumplir cincuenta y cinco años de edad para poder disfrutar de su pensión. Lo que debe ser respetado de manera irrestricta conforme al derecho fundamental de legalidad reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En otras palabras, si un trabajador decidió separarse voluntariamente del servicio después de haber cotizado al menos quince años al Instituto en términos del invocado numeral 66 de la Ley del ISSSTE abrogada; es claro que **lo hizo al amparo de un derecho adquirido que le otorgaba precisamente esa norma**, en cuanto a que sólo tenía que esperar a cumplir cincuenta y cinco años de edad para disfrutar la pensión.

Por ello, estimo que el asunto en cuestión debió fallarse en un diverso sentido, sobre todo, con base en una visión más humana, pues, se insiste, considero que no puede estimarse válido que se pretenda desconocer un derecho que el trabajador asumió como adquirido en el momento en que decidió separarse del servicio voluntariamente, a fin de esperar solamente a cumplir la edad para disfrutar de su pensión.

Así, considero que en el presente caso, debió tenerse en cuenta el texto vigente del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, se debió atender a un criterio que favoreciera al individuo –o lo que se ha denominado principio *pro persona*–, ante la divergencia de interpretaciones, pudiendo optar por la más favorable al trabajador, que en el caso concreto es la que sostenía el Primer Tribunal Colegiado.

En efecto, el aludido numeral (artículo 1o. constitucional) contiene el principio pro persona que, como ha explicado la doctrina,[2] constituye un criterio hermenéutico que informa todo el marco de los derechos humanos, **en virtud del cual, se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria**.

Una manifestación de ese principio es la **preferencia interpretativa** (la otra es la preferencia de normas) que, a su vez, se expresa en la interpretación extensiva y la interpretación restringida.

---

[2] Fuente consultada: Héctor Fix Zamudio/Salvador Valencia Carmona. "Las Reformas en Derechos Humanos", Editorial Porrúa, México, segunda edición, página 23."

Pero ya sea en una u otra de las variantes, lo relevante es que en la preferencia interpretativa, **el intérprete ha de preferir la interpretación que más optimice un derecho fundamental**, sin que pueda dejar de tomarse en cuenta que dicho principio interpretativo se materializa en distintos sub-principios, entre los cuales se encuentra el de *in dubio pro actione*, que constituye la aplicación del principio pro persona al ámbito procesal, de forma que el intérprete debe analizar las restricciones o limitaciones legales para acceder al órgano jurisdiccional de forma restrictiva, con el objetivo de lograr que el mayor número de procesos sea iniciado y, en la medida en que sea posible, se satisfaga la pretensión del demandante optimizando con ello el derecho a la jurisdicción.

Así, en la especie, como se dijo, una interpretación más favorable sería, sin duda, aquella en la que se estime que si algún trabajador contaba con quince años de servicio y dejó su fondo de aportaciones; desde ese momento adquirió el derecho al otorgamiento de una pensión jubilatoria por edad y años de servicios y, por ende, es aplicable la Ley del ISSSTE abrogada, pues aunque todavía no tenía la edad requerida de cincuenta y cinco años, el artículo 66 de dicho cuerpo normativo establecía que debía otorgársele la aludida pensión, una vez que cumpliera esa edad.

Tan es así, que el propio numeral refiere en su parte final que si el trabajador separado llegara a fallecer antes de cumplir los cincuenta y cinco años de edad, se hará efectiva tal pensión a favor de sus familiares derechohabientes. Situación ésta que patentiza, se reitera, la existencia de una prerrogativa obtenida y no una simple expectativa de derecho.

En resumen, estimo que el beneficio de la jubilación se concedió implícitamente cuando el trabajador decidió acogerse a lo establecido en el artículo 66 de la Ley del ISSSTE abrogada, generándosele así un verdadero derecho adquirido, dado que la jubilación ya estaba autorizada por la ley. De ahí que no se está en presencia de una mera expectativa de derecho, porque, desde la perspectiva del suscrito Magistrado, ya estaba concretada su jubilación desde ese momento, esto es, el beneficio ya había sido autorizado en términos de esa ley.

Por tanto, estimo que los aspectos que debían considerarse para determinar la aplicabilidad de la Ley del ISSSTE abrogada norma eran: a) que el trabajador hubiera cotizado cuando menos quince años al instituto; b) que se hubiera acogido al beneficio contemplado en el multicitado artículo 66, durante la vigencia de esa ley; y, c) que la autorización se otorgara con base en la misma.

Por tales razones es que el suscrito Magistrado decidí votar en sentido contrario al proyecto que fue sometido a consideración del Pleno de este Circuito y sostener que debió adoptarse la postura adoptada por el Primer Tribunal Colegiado.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular que formula el Magistrado Silverio Rodríguez Carrillo en relación a la contradicción de tesis 4/2014 sustentada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito, resuelta en sesión del seis de marzo de dos mil catorce.

No se comparte el sentido de la ejecutoria resuelta por mayoría de votos –considerando el voto de calidad de la Magistrada Presidente del Pleno del Trigésimo Circuito– pues se parte de la premisa de que el cumplir los cincuenta y cinco años de edad, **es un requisito** más para la obtención de la pensión y que, por ende, para adquirir el derecho al otorgamiento de la pensión, debe estarse a la legislación vigente al momento en que se cumplan todos los requisitos; **sin embargo**, adverso a esa posición, el suscrito estima que el cumplir la edad de cincuenta y cinco años para la obtención de la pensión, es una **consecuencia (diferida en el tiempo)**, porque los supuestos (cotizar por más de quince años y dejar la totalidad de las aportaciones), se suscitaron bajo la vigencia de la norma anterior.

El artículo 66 de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, establecía:

"El trabajador que se separe del servicio **después de haber cotizado cuando menos 15 años** al instituto podrá dejar la totalidad de sus aportaciones con objeto de gozar de la prerrogativa de que al cumplir la **edad requerida** para la pensión se le otorgue la misma. Si falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta ley."

De esta porción normativa se desprende que, el trabajador que se separara del servicio **después de haber cotizado por más de quince años**, podría:

(a) Dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social con el propósito de que **al cumplir los cincuenta y cinco años** de edad se le otorgue la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios; y

(b) En el eventual caso de que el trabajador separado, falleciera antes de cumplir los 55 años de edad, dicha pensión, se le otorgaría a sus derechohabientes.

Ahora bien, en criterio del suscrito, para dilucidar el punto de litis, es necesario acudir a la teoría de los **componentes de la norma**,[1] en cuanto toda norma jurídica contiene un supuesto **y una consecuencia**, en el que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes.

Sin embargo, el **supuesto y la consecuencia** no siempre se generan de **modo inmediato**, pues puede suceder que **su realización ocurra fraccionada en el tiempo**, por

[1] Explicada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."

lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas, es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo:

a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de **modo inmediato** el supuesto y la consecuencia en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia, sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una nueva ley.

b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y **varias consecuencias sucesivas**. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, **quedando pendientes** algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.

c) **Cuando la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley**.

d) Cuando para la ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los **supuestos** señalados en la misma **se realicen después** de que **entró en vigor la nueva norma**, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley, no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición).

Queda de manifiesto entonces, que para el análisis del tema de irretroactividad, como el que se plantea, deben tomarse en cuenta los **distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva disposición**.

Por ende, si en el caso en concreto, el artículo 66 de la citada legislación, vigente en la fecha de la separación del trabajador, establece en específico, que cuando aquél se separe del servicio **después de haber cotizado por más de quince años**, podrá **dejar** en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social con el propósito de que **al cumplir los cincuenta y cinco años** de edad se le otorgue la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios; ello implica –de acuerdo a la teoría de los componentes de la norma– la actualización de **dos supuestos**:

I. Que el trabajador cuente con más de quince años de servicios, pero no cincuenta y cinco años de edad; y

II. Que optara por dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social;

III. Y su **consecuencia**, es que **al cumplir los cincuenta y cinco años** de edad se le otorgue la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios.

Por ende, si **los dos supuestos** se actualizaron bajo la vigencia de la Ley del ISSSTE abrogada, y únicamente **estaba diferida en el tiempo** (por el establecimiento de un plazo en cuanto el trabajador cumpliera cincuenta y cinco años de edad) la **consecuencia**, entonces, resulta inconcuso, que conforme lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 123/2001, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.", la nueva disposición (Ley del ISSSTE vigente a partir del primero de abril de dos mi siete), no puede suprimir, modificar o condicionar las **consecuencias no realizadas**, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.

Consecuentemente, si bien el trabajador a la fecha en que dejó de cotizar para el ISSSTE, no contaba con los cincuenta y cinco años que exigían los numerales 61 y 66 de la Ley del ISSSTE abrogada, para obtener una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, ello no es obstáculo en criterio del suscrito, para que alcanzada la edad precisada por la norma para el otorgamiento de la pensión, ésta sea procedente, pues **se acogió a la prerrogativa o beneficio** establecido en el citado precepto 66, esto es, dejó en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social.

En lo tocante a las jurisprudencias que se invocan en la ejecutoria de la mayoría identificadas bajo los números P./J. 125/2008 y P./J. 108/2008, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).", e "ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)."; se estima que resultan inaplicables, pues éstas se refieren al último supuesto de la teoría de componentes de la norma, reseñado en el **inciso d)**, de este voto, eso es, parten de la premisa de que tanto el **supuesto**, como sus **consecuencias** acontecen bajo la **vigencia de la nueva disposición**.

Sin embargo, en el punto de la contradicción de criterios, se reitera que el suscrito estima que los supuestos específicos a que se refería el artículo 66 de la Ley del ISSSTE abrogada, se actualizaron para el trabajador –que se separó del servicio **después de haber cotizado por más de quince años**, y dejó en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social– bajo la vigencia de aquélla, por lo que, aun cuando el primero de abril de dos mil siete haya entrado en vigor la Ley del ISSSTE que actualmente rige, ésta no puede modificar aquel derecho adquirido de obtener una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, pues al **dejar el trabajador la totalidad de sus aportaciones, desde la fecha de su retiro** es inconcuso que para gozar de esa prerrogativa, únicamente debía alcanzar la edad impuesta por la norma abrogada.

Además, la conclusión alcanzada por la mayoría, también haría nugatoria la prerrogativa establecida en el citado artículo 66 de la Ley del ISSSTE vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en cuanto establece que si el trabajador llegara a fallecer **antes** de cumplir los 55 años de edad, a sus familiares derechohabientes se les otorgará la pensión en los términos de esta ley; redacción del precepto en análisis que hace patente aún más, que si el trabajador al momento de la separación, había cotizado cuando menos 15 años al ISSSTE y dejaba la totalidad de sus aportaciones, ya había adquirido el derecho de gozar de la pensión jubilatoria por edad y tiempo de servicios, una vez que la consecuencia de esos supuestos normativos, se suscitara, esto es, el cumplir la edad requerida para su otorgamiento, extremo que en criterio del suscrito, hace patente que el trabajador no sólo tenía una expectativa de derecho al momento de su separación, sino se insiste, de un **derecho adquirido**.

En efecto, el **derecho adquirido**, es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la **introducción de un bien**, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho, es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro.[2]

Por tanto, en el caso en concreto, al cumplirse los supuestos de la norma, al momento de la separación del trabajador, no pueden modificarse o destruirse los derechos que éste o sus beneficiarios (en caso del fallecimiento del trabajador antes de cumplir la edad requerida por la norma), habían adquirido bajo la vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica, y **sólo estaba diferida en el tiempo** su consecuencia (otorgar la pensión), una vez que se actualizaran **cualquiera de las dos situaciones** previstas en el citado numeral 66, esto es: **(I)** que el trabajador alcanzara la edad requerida, o **(II)** que falleciera aquél antes de cumplir esa edad, caso en el cual, la pensión podría solicitarse por sus beneficiarios.

Finalmente, el nuevo paradigma constitucional que incluye el principio pro persona –previsto en el artículo 1o. de la Carta Magna– obliga a que se adopten medidas protectoras, que sin carecer de sustento legal e interpretativo, permitan adoptar medidas protectoras, a fin de concluir en una **solución justa, incluyente y acorde a derecho**;[3] de ahí que esa es una razón más para disentir de la interpretación restrictiva que en mi opinión, se hace del estudio de conflicto de leyes en el tiempo, en la ejecutoria de la mayoría para colegir que los trabajadores separados del servicio y que cum-

[2] Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXXVIII/2001, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, del mes de junio de 2001, página 306, de rubro siguiente: "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS."

plían en ese momento, con los supuestos a que se refiere el artículo 66 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada (contar con más de quince años de servicios, pero no cincuenta y cinco años de edad; y que optaran por dejar en el fondo de pensiones la totalidad de sus aportaciones de seguridad social), no tienen con ese proceder derecho adquirido alguno para que una vez alcanzada la edad requerida por ese precepto, obtuvieran la pensión por edad y tiempo de servicios.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 123/2001, P./J. 125/2008 y P./J. 108/2008 citadas en este voto, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 16 y Tomo XXX, septiembre de 2009, páginas 35 y 28, respectivamente.

Este voto se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 108/2008 y P./J. 125/2008, determinó que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, en cuanto establece un nuevo régimen de seguridad social, no viola el principio de irretroactividad de la ley, al considerar que a partir de la teoría de los derechos adquiridos la pensión, al no ser un derecho que adquieran los trabajadores cuando empiezan a laborar y cotizar al instituto, se traduce en una expectativa

[3] Así lo ha considerado la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis 1a. CXCIII/2012 (10a.), visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, del mes de octubre de 2012, página 1196, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LOS CRITERIOS EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN AQUELLOS ASUNTOS, CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, DEBEN SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO *PRO PERSONAE*, CON INDEPENDENCIA DE QUE LOS ÓRGANOS CONTENDIENTES HAYAN DICTADO SUS SENTENCIAS CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR."

de derecho. Con base en dicho criterio si un trabajador, no activo, solicitó el otorgamiento de una pensión por edad y tiempo de servicio, por haber dejado de laborar y haber cotizado, cuando menos 15 años, y no disponer de sus fondos, actualizándose parcialmente los supuestos previstos en el artículo 66 de la ley abrogada, pero el requisito de la edad contenido en ese precepto (55 años) se cumplió estando vigente la nueva ley, debe atenderse a lo dispuesto en esta última, que incrementó gradualmente la edad para otorgar la aludida pensión, y no a la abrogada, pues se está ante una mera expectativa de derecho, y se trata de un supuesto que se cumplió con posterioridad a que entró en vigor la ley.

PLENO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
PC.XXX. J/12 A (10a.)

Contradicción de tesis 4/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 6 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Lucila Castelán Rueda, Álvaro Ovalle Álvarez y José Luis Rodríguez Santillán, con ejercicio de voto de calidad de la primera de los nombrados en su carácter de Presidenta del Pleno del Trigésimo Circuito. Disidentes: Esteban Álvarez Troncoso, Miguel Ángel Alvarado Servín y Silverio Rodríguez Carrillo. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretaria: Rocío Itzel Valdez Contreras.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 814/2013, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 491/2014.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 108/2008 y P./J. 125/2008, citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, páginas 28 y 35, con los rubros "ISSSTE. LA LEY RELATIVA EN CUANTO ESTABLECE UN NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL SUSTANCIALMENTE DIVERSO AL REGULADO EN LA LEY DE 1983, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)." e "ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

QUINTA PARTE
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

SECCIÓN PRIMERA
JURISPRUDENCIA

Subsección 1.
POR REITERACIÓN

CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

AMPARO EN REVISIÓN 104/2014. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: SANTIAGO ERMILO AGUILAR PAVÓN.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Análisis de la revisión principal.

I. Inconstitucionalidad del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

Aduce la recurrente en su primer agravio, que resultó incorrecto que el Juez de Distrito le negara la protección constitucional con base en el argumento de que el artículo 93 de la Constitución Local no exigía que los decretos promulgatorios de leyes, específicamente el diverso 307, fuera refrendado por el secretario del ramo, sino únicamente por el secretario de Gobierno.

Ello es así, asevera, pues el a quo soslayó en su análisis constitucional que el proceso legislativo que dio origen a la reforma del artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo –en la cual se

suprimió que los decretos promulgatorios de leyes fueran refrendados también por el secretario del ramo– se encuentra viciado, lo que a su vez torna inconstitucional el decreto y proceso legislativo señalados como reclamados, pues debía estimarse vigente el texto constitucional anterior, que exigía el refrendo del secretario del ramo.

Lo anterior es inoperante.

En efecto, son inatendibles, por ajenos a la litis constitucional, los agravios en donde el recurrente aduce vicios al proceso legislativo que culminó con el Decreto 299, mediante el cual se reformó el artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Esto es así, pues la quejosa, hoy recurrente, señaló como acto reclamado el Decreto 307, por el que se reformaron los artículos 42 y 43, fracción V y se adicionó el diverso 39-A de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.

Al respecto, consideró la quejosa que era inconstitucional el acto reclamado, porque en su proceso legislativo se incurrió en las siguientes violaciones:

• El referido decreto no había sido refrendado por el secretario de Hacienda del Estado, como lo ordena el artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la referida entidad federativa; y

• Dichas disposiciones se excedían al imponer la obligación al contribuyente que no tuviera domicilio en el Estado, de aperturar una cuenta con domicilio en esta entidad, ya que ello no tiene relación alguna con el objeto del tributo.

Conforme a lo anterior, es claro que la recurrente intenta introducir agravios ante esta instancia revisora que versan sobre temas que no fueron planteados ante el a quo, lo que lleva, indefectiblemente, a estimarlos inoperantes por basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, pues a través de dichos argumentos novedosos no podrían combatirse los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 150/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan:[20]

[20] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 52. Registro digital: 176604.

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN.—En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida."

En tales condiciones, toda vez que el artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,[21] reformado el treinta de julio de dos mil trece y su transitorio,[22] prescinden del requisito del refrendo del secretario del ramo tratándose de los decretos promulgatorios de leyes, siendo que únicamente es obligatorio para el secretario de Gobierno del Estado; entonces, dado que esa reforma inició su vigencia al día siguiente de su publicación, esto es, el treinta y uno de julio de dos mil trece, debe entenderse que a partir de esa data ya no era necesario que el secretario del ramo refrendara el decreto correspondiente, sino que únicamente requería el del secretario de Gobierno.

Consecuentemente, resulta inatendible lo alegado por la recurrente, en el sentido de que el proceso legislativo que dio origen al Decreto 307 resultaba inconstitucional (porque el nuevo texto constitucional presentó vicios en su proceso de reforma) al considerar vigente el texto constitucional anterior que establecía el refrendo del secretario del ramo, en este caso, del secretario de Hacienda del Estado pues, como se apuntó, tales agravios no fueron incor-

---

[21] "Artículo 93. Todos los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el gobernador del Estado deberán estar firmados por el secretario al que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.
"Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el Congreso del Estado, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría de Gobierno."

[22] Decreto Número 299, por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
"Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo."

porados a la litis constitucional de origen, vía conceptos de violación y, en el caso, correctamente se obtuvo que la vigencia del artículo 93 de la Constitución Local no prevé como requisito más que el refrendo del secretario de Gobierno.

II. Obligación de abrir una cuenta bancaria.

En otra parte de los agravios, reclama la sociedad recurrente que el artículo 43 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo impone una obligación que va más allá del tributo, consistente en que las prestadoras de servicios deben abrir una cuenta bancaria en el lugar en donde prestan sus servicios.

Lo anterior, dice la recurrente, es una medida que resulta excesiva porque no tiene ninguna relación con el objeto del impuesto sobre nóminas; además, si se tratara de alguna forma para facilitar su pago, no debería ser obligatoria sino optativa.

Luego, refiere que el a quo dejó de estudiar íntegramente el segundo concepto de violación, al señalar que dicho precepto legal cumplía con el principio de proporcionalidad.

Es fundado el agravio en su causa de pedir.

Asiste razón a la parte recurrente al referir que el a quo analizó de forma incorrecta el planteamiento hecho valer en el segundo concepto de violación, en relación con la constitucionalidad de la porción normativa indicada del artículo 43 de la ley combatida, ya que se refería al establecimiento de una obligación formal, no sustantiva.

En principio, conviene precisar la forma en que opera el control constitucional de una norma de carácter tributario, a la luz del principio de proporcionalidad tributaria.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"…

"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Del precepto constitucional en cita se advierte que constituye una obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos que realiza el Estado, de manera proporcional y equitativa.

Contribuir implica cubrir los impuestos federales, estatales y municipales que fijen las leyes, a través de una cantidad en dinero o en especie que deben aportar al Estado las personas físicas o morales que la ley establece a su cargo, y también equivale a pagar conjuntamente con otros sujetos el tributo que la ley determina para sufragar los gastos necesarios para el desarrollo adecuado de las funciones que incumben al Estado.

En efecto, el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal tiene un contenido económico que se traduce en el pago en dinero de las sumas que el poder público legislativamente determina por medio de una contribución, cuya cuantía impone al causante.

De esta forma, es dable sostener que tanto la contribución como sus elementos (sujeto, objeto, base y tasa) generan consecuencias jurídicas particulares que inciden directa o indirectamente en el patrimonio del gobernado y, por ende, en el aspecto sustancial de la obligación tributaria.

En ese sentido, cuando las actuaciones del legislador incidan en la obligación (sustantiva) relativa al pago de la contribución, deberá ajustar su potestad tributaria a los límites y parámetros constitucionales en materia tributaria, identificados con los principios de equidad y proporcionalidad, en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional.

No obstante, dichos principios no son privativos de la obligación sustantiva o de los elementos esenciales de la contribución, pues son susceptibles de trascender y regir diversas obligaciones formales vinculadas con figuras tributarias, tales como la causación, exención, devolución, entre otras, que inciden en su cumplimiento.

Son aplicables las tesis 1a. XCIX/2006[23] y 1a. XXXIV/2007,[24] sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, respectivamente dicen:

---

[23] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 187. Registro digital: 174853.
[24] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 639. Registro digital: 173305.

"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LAS OBLIGACIONES FORMALES QUE NO TRASCIENDEN A LA OBLIGACIÓN FISCAL SUSTANTIVA, NO DEBEN ANALIZARSE DESDE LA ÓPTICA DE DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está dirigido a las contribuciones en sí mismas consideradas, a sus elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa o tarifa, y a los elementos que trascienden a la obligación esencial de pago, sin que sea factible hacerlo extensivo a las obligaciones formales a cargo de los contribuyentes que constituyan simples medios de control en la recaudación a cargo de la autoridad administrativa. En esos términos, se concluye que el establecimiento de una obligación formal relacionada con la manera en que ha de llevarse la contabilidad de los contribuyentes, al no trascender a la obligación fiscal sustantiva, no debe analizarse desde la óptica del referido principio constitucional. En todo caso, el argumento respectivo tendría que presentarse en términos del costo inherente al cumplimiento de la obligación formal, lo cual no tiene un efecto en términos de principios tributarios o, específicamente, de capacidad contributiva, sino más bien, podría llegar a tener un impacto general –no fiscal– en las finanzas del contribuyente, lo cual, al constituir un agravio de vinculación económica, no jurídica, no sería idóneo para acceder a la protección constitucional." y

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SU ÁMBITO DE APLICACIÓN COMPRENDE DISPOSICIONES LEGALES QUE TRASCIENDEN AL MONTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL DE PAGO, AUNQUE NO AFECTEN DIRECTAMENTE LA CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN.—El Tribunal en Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que la garantía de equidad tributaria tutelada en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que los sujetos de una misma contribución guarden una situación de igualdad frente a la norma jurídica que establece y regula el gravamen, esto es, la proyección de la citada garantía constitucional se ha circunscrito a un ámbito específico de aplicación, correspondiente a las actuaciones formal y materialmente legislativas, buscando que éstas generen consecuencias jurídicas particulares que incidan directa o indirectamente en el aspecto sustancial de la obligación tributaria –es decir, respectivamente, cuando ello se haga por una modificación en los elementos esenciales de la contribución, o bien, mediante el establecimiento de cualquier otra medida que altere la cantidad que legalmente hubiere correspondido cubrir– lo cual debe estar sujeto a con-

trol constitucional, bajo la óptica de la garantía de equidad tributaria. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal constitucional, ha pretendido que se otorgue plena vigencia a los principios tributarios establecidos por la Ley Fundamental, para lo cual no ha circunscrito su eficacia a las disposiciones legales que establecen gravámenes o que definen o modifican alguno de los elementos esenciales de la contribución, sino que progresivamente ha delimitado el contenido y alcance de las garantías tributarias, a fin de que también sean el parámetro al que se ajuste el legislador cuando sus actuaciones incidan en la obligación sustantiva relativa al pago de la contribución, sea que ello ocurra con la delimitación –conceptual o cuantitativa– de dichos elementos esenciales de la contribución, mediante obligaciones formales que estén estrechamente vinculadas con la determinación de la deuda tributaria, o bien, a través del otorgamiento de algún beneficio que afecte la cantidad que será cubierta por concepto del tributo. Lo anterior es así, en virtud de que la obligación constitucional de concurrir al levantamiento de las cargas públicas tiene un contenido esencialmente económico, lo cual implica la disposición de recursos monetarios a favor del Estado por concepto de contribuciones; de ahí que en cualquier actuación legislativa que repercuta en la obligación tributaria sustantiva –el pago– los principios constitucionales en materia tributaria deben tener plena eficacia."

Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 183/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:[25]

"EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO RIGE EN OBLIGACIONES SUSTANTIVAS Y FORMALES, PERO EN ESTA ÚLTIMA HIPÓTESIS ES BÁSICO QUE INCIDA DIRECTAMENTE SOBRE LAS PRIMERAS.—El cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal tiene un contenido económico que se traduce en el pago en dinero de las sumas que el poder público legislativamente determina por medio de una contribución, cuya cuantía impone al causante. En ese tenor, el principio de equidad tributaria previsto en la citada Norma Suprema está dirigido a todos los elementos fiscales vinculados directamente con la causación, exención, devolución, entre otras figuras fiscales que inciden en la obligación sustantiva relativa al pago de la contribución, es decir, no sólo los referidos al sujeto, objeto, tasa y base, trascienden a la obligación esencial de pago, sino tam-

[25] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 541. Registro digital: 179587.

bién algunas obligaciones formales, que no son simples medios de control en la recaudación a cargo de la autoridad administrativa, ya que están estrechamente vinculadas con el núcleo del tributo (pago), siendo que en este supuesto igualmente rige a plenitud el citado principio de justicia fiscal."

De lo anterior se concluye que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad actúan tanto en obligaciones sustantivas como en formales, siempre que, en esta última hipótesis, incidan directamente en la citada obligación sustantiva, pues de constituir un simple control de la autoridad administrativa para la mejor recaudación de los impuestos, no serían susceptibles de enlazarse directamente con el deber contributivo a que alude el artículo 31, fracción IV, constitucional.

En tales condiciones, dado que las leyes tributarias son disposiciones de observancia general que dimanan tanto de la expresión tributaria del Estado, como de la potestad regulatoria de los procedimientos de fiscalización, liquidación y cobro coactivo de los tributos, resulta necesario distinguir entre una obligación sustantiva y otra de carácter formal.

Obligación sustantiva	Obligación formal
Las obligaciones principales o sustantivas consisten en:	Son aquellas de carácter accesorio o formal previstas en un acto materialmente legislativo, cuyo objeto se circunscribe en:
• El deber de pago del impuesto o contribución;	• Obligación de hacer. Vincular a los gobernados a desarrollar una determinada conducta diversa al pago en sí de contribuciones: presentar declaraciones, llevar libros de contabilidad, entre otros;
• Su contenido afecta el patrimonio del gobernado;	• Obligación de no hacer. No oponerse a las facultades de comprobación, no proporcionar datos falsos, etcétera.
• Inciden en el pago mismo del tributo; y,	• Tolerar. Práctica de visitas domiciliarias, revisión de libros de contabilidad, papeles, entre otras.

• Regulan los elementos de la contribución: sujeto, hecho imponible, procedimiento para cuantificar la base gravable, cuota, tarifa, no sujeciones, exenciones, entre otras figuras fiscales.	

Como se advierte, las obligaciones sustantivas trascienden al núcleo de la obligación de pago, mientras que las formales o de carácter perimetral no lo hacen, pues sólo tienen la finalidad de permitir al fisco una mejor vigilancia en el cumplimiento de la obligación de pago.

En tales condiciones, es claro que los principios tributarios de equidad y proporcionalidad sólo resultan aplicables a las primeras, esto es, a las de carácter sustantivo, pues a través de dicho principio de ponderación se podrá definir la medida en que se debe contribuir al gasto público.

En cambio, por regla general, las obligaciones formales o perimetrales no pueden someterse ni analizarse a la luz de los principios tributarios de equidad y proporcionalidad, al tener la naturaleza de herramientas de control y vigilancia en el cumplimiento de la obligación sustantiva de pago.

En tales condiciones, podrá alegarse la inconstitucionalidad de las normas tributarias, por lo siguiente:

Obligación tributaria.	Posible análisis constitucional:
De carácter esencial: • Obligación de pago; • Elementos del tributo; • Cuestiones que incidan directamente en su cumplimiento; y, • Instrumentos o procedimientos contables que inciden directamente en la determinación del impuesto.[26]	Principios de justicia fiscal: Art. 31, fracción IV, de la CPEUM • Equidad tributaria; y, • Proporcionalidad tributaria.

[26] Vid., jurisprudencia P./J. 17/2013, de rubro: "CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). LAS NORMAS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO DE SU INTEGRACIÓN PUEDEN EXAMINARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.", sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 5. Registro digital: 2003840.

De carácter formal, accesoria o perimetral: Relacionadas con: • La manera en que ha de llevarse la contabilidad de los contribuyentes; • La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales;[27] y, • Herramientas de control recaudatorio.[28]	Principio de legalidad, igualdad e interdicción de la arbitrariedad y exceso legislativo 1o., 14 y 16 de la CPEUM.

Con todo, lo antes dicho no implica que las normas de carácter formal que impongan obligaciones perimetrales a la obligación sustantiva tributaria, se encuentren exentas de control constitucional, pues todo acto legislativo puede ser analizado a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad legislativa.

En el caso que nos ocupa, la sociedad quejosa, aquí recurrente, en sus conceptos de violación no circunscribió únicamente la deficiencia legislativa material del artículo 43 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo a una infracción al principio de proporcionalidad tributaria, sino que la vinculó a un exceso y falta de razonabilidad legislativa.

A fin de corroborar lo anterior, conviene transcribir los conceptos de violación donde la quejosa aduce el citado vicio material del artículo combatido:

"Ahora bien, considerando que el artículo 43 antes mencionado es un dispositivo que regula ciertas obligaciones a las que están sujetas los contribuyentes del impuesto sobre nóminas, es evidente que las obligaciones a las que sujete a dichos contribuyentes tienen que estar relacionadas precisamente con el pago del tributo en mención.

---

[27] Vid., jurisprudencia 1a./J. 56/2006, de rubro: "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN DE LLEVARLOS COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO LE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2004).", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 56. Registro digital: 174281.

[28] Vid., jurisprudencia P./J. 8/2012 (10a.), de rubro: "DECLARACIÓN FISCAL. LA OBLIGACIÓN DE PRESENTARLA ES DE CARÁCTER FORMAL, POR LO QUE NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página 5. Registro digital: 2001091.

"Sin embargo, dicho dispositivo establece, por un lado, las obligaciones que se encuentran íntimamente relacionadas con el objeto del impuesto, tales como llevar a cabo el pago del impuesto antes del día 17 del mes siguiente a aquel en que causó el tributo, o incluir dentro de los sujetos obligados al pago del impuesto incluso a aquellos contribuyentes que no se encuentren domiciliados en el territorio del Estado de Quintana Roo pero, no obstante ello, cuenten con personal subordinado en dicho Estado y, por otro lado, dispone una obligación que va claramente más allá del tributo en cuestión, la cual consiste en que las empresas prestadoras de servicios deban abrir una cuenta bancaria en el lugar donde se preste el servicio e informar de ello a la autoridad recaudadora, obligación que sin duda resulta excesiva, simplemente porque no tiene relación alguna con el objeto del impuesto sobre nóminas.

"Es decir, si el objeto del impuesto sobre nóminas es gravar a quienes realicen erogaciones en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del Estado de Quintana Roo, es evidente que el hecho de que se obligue a los contribuyentes de dicho impuesto a abrir una cuenta bancaria e informar de ello a la autoridad recaudadora, escapa por completo al objeto del impuesto mencionado, puesto que en nada se relaciona con el mismo y no existe un motivo que evidencie la necesidad de establecer dicha obligación, resultando desproporcional el que haya establecido.

"Además, si los sujetos pasivos del impuesto sobre nóminas cumplen con su obligación de enterar el impuesto en las fechas y modalidades señaladas en la ley, se da por satisfecha su obligación contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, puesto que ya se encuentran contribuyendo de manera equitativa y proporcional al gasto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; sin embargo, el que tengan que cumplir con una obligación adicional y no relacionada en lo absoluto con el objeto del impuesto, como es la apertura de la cuenta bancaria y la notificación respectiva a la autoridad correspondiente, excede por mucho el deber de contribuir al gasto público, razón por la cual el dispositivo reclamado resulta por demás inconstitucional."

Como se advierte, la sociedad quejosa identifica y divide, con meridiana claridad, la porción normativa del citado artículo 43, que (probablemente) incide en una parte sustantiva de la obligación tributaria, a saber: la fecha en que tiene que verificarse la obligación de pago y, a su vez, destaca aquella de carácter no sustantivo que impone la obligación de aperturar una cuenta bancaria en el lugar donde se preste el servicio e informar de ello a la autoridad recaudadora.

Lo cual, como se informó, fue destacado por la sociedad recurrente en el escrito de agravios que ocupa a esta instancia constitucional, donde en esencia señaló que el a quo no atendió la parte medular de su reclamo de legalidad y razonabilidad legislativa, en cuanto a la herramienta de control recaudatorio que la obligaba a aperturar una cuenta bancaria y a informar tal aspecto a la autoridad recaudadora, lo cual estimó que resultaba excesivo e irracional, porque en realidad dicha medida no contribuía ni facilitaba directamente el cumplimiento de la obligación tributaria.

Sin embargo, el Juez de amparo resolvió al respecto que la citada porción normativa no resultaba excesiva ni desproporcional, porque "constituye únicamente un requerimiento formal dirigido al contribuyente para el debido control de la recaudación".

Análisis del a quo que, desde luego, implica que omitió estudiar el contenido del precepto reclamado de manera desvinculada con el principio de legalidad tributaria pues, como se vio, la Suprema Corte de Justicia, en su integración Plenaria y en sus Salas, ha determinado la imposibilidad técnico jurídica de analizar disposiciones de carácter tributario formal; esto es, las no vinculadas con el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva, sus elementos y figuras afines, a la luz del citado principio de legalidad tributaria, reduciendo su análisis a un simple escrutinio de legalidad y razonabilidad legislativa que no es ajeno a ningún tipo de producción normativa secundaria.

Luego, es claro que, en la especie, el juzgador de amparo debió emprender el análisis de dicha porción normativa de carácter perimetral a la obligación sustantiva tributaria, a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad legislativa, conforme al principio *iura novit curia*.

En ese sentido, si bien es cierto que el Juez de amparo atendió los conceptos de violación propuestos y adujo las razones por las cuales a su parecer no era dable estimar que la porción normativa del citado artículo 43 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo resultara excesiva o desproporcional, lo cierto es que dicho análisis indebidamente lo circunscribió a un tema de legalidad tributaria, pues de ser así, debió concluir que los argumentos planteados devenían inoperantes por cuanto hace a dicha obligación formal, dado que en relación con ellos no rige el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Con todo, a pesar de lo antes mencionado, el a quo soslayó apreciar si la obligación formal o periférica, consistente en aperturar una cuenta bancaria e informar de tal aspecto a la autoridad recaudadora, abonaban o beneficia-

ban a algún mecanismo recaudador a la luz de un test de constitucionalidad desvinculado de la garantía de legalidad tributaria, lo que de suyo, como se verá, resultaba imprescindible para brindar una respuesta integral a los conceptos de violación, en los que se planteó el exceso legislativo.

En suma, aun cuando la naturaleza de la porción normativa del precepto cuestionado (obligación tributaria formal o periférica) no permita emprender su análisis por el órgano de control constitucional a la luz del principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, como se apuntó, ello no significa que dichas normas puedan escapar del control constitucional a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad legislativa, previstos en los artículos 14 y 16 de la propia Constitución.

Se concluye así, pues pensar lo contrario implicaría permitir al legislador imponer, sin límite alguno, medidas y controles para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, bajo el inaceptable argumento de que dicha producción legislativa –dada su naturaleza– está exenta de control constitucional.

Dado lo fundado del agravio planteado por la recurrente, se procederá al análisis de un test constitucional que buscará poner de relieve la idoneidad de las medidas adoptadas por el legislador y su razonabilidad, todo ello, a la luz del principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

• Test de proporcionalidad normativa.

En primer término, debe decirse que el principio de proporcionalidad, como instrumento metodológico, es un procedimiento interpretativo para la resolución de conflictos entre los contenidos esenciales de las disposiciones normativas fundamentales, que encuentra asidero constitucional en los diversos principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.[29]

[29] Vid., tesis 1a. LIII/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, materia constitucional, página 882, del tenor siguiente: "TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE REQUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN.—El principio de proporcionalidad, como instrumento metodológico, es un procedimiento interpretativo para la resolución de conflictos entre los contenidos esenciales de las disposiciones normativas fundamentales, que encuentra asidero constitucional en los diversos principios

En ese sentido, el principio de proporcionalidad que nos ocupa es diverso y nada tiene que ver con el previsto para la materia fiscal en el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que se refiere a aspectos de razonabilidad legislativa y no a la capacidad tributaria.

Así, el mencionado principio, visto como instrumento, nos permite realizar un test de proporcionalidad aplicable a toda actividad del Estado, cuya finalidad es asegurar que el poder público actúe sin excederse en el ejercicio de sus funciones.[30]

---

de igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho principio opera principal, mas no exclusivamente, cuando se aduce la violación al principio de igualdad o equidad tributaria como manifestación específica de éste, pues en ese caso se requiere llevar a cabo, en primer lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado, esto a partir de un término de comparación, en la medida en que el derecho a la igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de alguien o algo. Así, para verificar si el tratamiento desigual establecido por el legislador resulta constitucionalmente válido, en segundo lugar, el principio de proporcionalidad se conforma de tres criterios, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, consistentes en: a) que la distinción legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; b) que la distinción establecida resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin y, c) la distinción debe ser proporcional, es decir, no es válido alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional. Ahora, en materia tributaria la Suprema Corte consideró en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, que la intensidad del escrutinio constitucional, a la luz de los principios democrático y de división de poderes, no es de carácter estricto, sino flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con una amplia libertad en la configuración normativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que a fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el mencionado, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Consecuentemente, la aplicación del principio de proporcionalidad por parte de la Suprema Corte en su carácter de Tribunal Constitucional, implica que el cumplimiento de los criterios que lo integran requiere de un mínimo y no de un máximo de justificación, es decir, basta que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; la elección del medio para cumplir tal finalidad no conlleva a exigirle al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo y no máximo de idoneidad y, finalmente, debe existir una correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables."

[30] Vid., tesis 1a. CCXXXVI/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, materia constitucional, página 209, de rubro y texto siguientes: "SECUESTRO EXPRESS. EL ARTÍCULO 163 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO SANCIONA, NO TRASGREDE (SIC) LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL (TEST DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA PENAL).—El principio de proporciona-

En esa tesitura, en el test de proporcionalidad deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

a) Que la regla legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida;

b) Que la regla establecida resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de instrumentalidad medio-fin; y,

c) La regla debe ser proporcional, es decir, no es válido alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional.

En consecuencia, se procede a realizar el test de proporcionalidad respecto a la razonabilidad del medio establecido en el cuarto párrafo del artícu-

---

lidad busca asegurar que el poder público actúe sin excederse en el ejercicio de sus funciones y es aplicable a toda actividad del Estado. Para comprobar si una norma penal creada por el legislador observa el referido principio, debe correrse un test que comprende el examen de tres aspectos: a) el fin y la idoneidad: consiste en determinar si la interferencia al derecho fundamental que se restringe persigue un fin constitucionalmente legítimo y si esa medida aflictiva, restrictiva o limitativa, es idónea para la finalidad buscada; b) la necesidad: parámetro que lleva a establecer si la medida cuestionada, dentro de las alternativas fácticas posibles, es la menos gravosa o restrictiva hacia el principio o derecho fundamental afectado por la intervención (intervención mínima); y, c) proporcionalidad: debe quedar acreditado que la medida es cualitativamente de mayor beneficio o igual al perjuicio que se ocasiona al derecho fundamental. Ahora bien, el artículo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, que prevé una pena de veinte a cuarenta años de prisión, es acorde con el principio de proporcionalidad y no vulnera el artículo 22 de la Constitución Federal, en atención a lo siguiente: 1) el legislador, tratándose del delito de "secuestro express", buscó proteger un derecho fundamental de igual valor al restringido, como es la libertad de las personas y adicionalmente su patrimonio; asimismo, buscó desalentar su comisión, pues ésta se ha vuelto excesiva; ciertamente, estableció una medida aflictiva de la libertad rigurosa para la finalidad buscada, pero idónea, porque de esa manera buscó proteger a la sociedad; 2) la medida restrictiva de la libertad de veinte años como mínima y cuarenta años como máxima, dentro de las alternativas fácticas posibles, es la menos gravosa, porque en aras del diverso principio de "*ultima ratio*" se castiga con penas más graves los ataques más intolerables a los bienes jurídicos más importantes y en este caso, sin duda, dicha penalidad es el medio más eficaz que la sociedad tiene a su alcance para plasmar su total desaprobación respecto de sujetos que realizan actos tan reprobables hacia sus congéneres, como es privarlos de la libertad para robarlos o extorsionarlos, ya que no existe un medio alternativo que, en casos como éste, revista la misma aptitud que la prisión para alcanzar la finalidad propuesta por el legislador, que es la de escarmentar severamente y disuadir; y 3) cualitativamente, la medida responde al equilibrio entre el interés general que se alcanza, como es el de salvaguardar a la sociedad de la proliferación de un delito que la impacta de manera considerable y el perjuicio individual que origina la afectación del bien jurídico, que es la libertad. En consecuencia, el dispositivo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, no atenta contra la garantía de proporcionalidad que establece el artículo 22, párrafo primero, de la Carta Fundamental; más aún, porque el tipo penal necesariamente exige la acreditación de una privación de la libertad a título de secuestro."

lo 43 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, para conducir a un fin y objetivo perseguidos.

El artículo 43 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo señala lo siguiente:

"Artículo 43. Las personas físicas, morales o unidades económicas, así como las dependencias, los organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos y los fideicomisos de gobierno, aun cuando estos sujetos tengan su domicilio fuera del Estado, así como los intermediarios laborales cualquiera que sea su denominación deberán efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día 17 del mes siguiente (sic) aquel en que se causó utilizando las formas autorizadas por la secretaría, a través de los medios electrónicos dispuestos por ésta, mediante reglas de carácter general, debiéndose efectuar en las instituciones bancarias autorizadas, con base a las disposiciones que al efecto emita la secretaría.

"Quedan incluidas las personas físicas, morales y unidades económicas que sin estar domiciliadas en el Estado, tengan personal subordinado en el territorio de éste, en sucursales, bodegas, agencias, unidades económicas, dependencias, y cualquier ente o figura que permita tener personal subordinado dentro del mismo.

"Serán considerados patrones, las empresas que presten servicios a otras, para ejecutarlos con elementos propios, y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, en los términos de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal de Trabajo. Cualquiera que sea la forma de pago de las remuneraciones que efectúen estas personas con motivo de la prestación de servicios de personas físicas a personas físicas o morales, serán sujetas del pago de este impuesto.

"Para el legal funcionamiento de estas personas, deberán aperturar una cuenta en institución bancaria debidamente autorizada, domiciliada en la circunscripción territorial donde se preste el servicio, y hacerlo del conocimiento de la autoridad recaudadora de rentas.

"El incumplimiento a esta disposición, hará responsable directo a quien reciba el servicio.

"La obligación de presentar declaraciones de pagos provisionales subsistirá aun cuando no hubiese cantidad a cubrir."

Para la realización del test de proporcionalidad, este órgano colegiado advierte del párrafo cuarto del precepto legal transcrito, las siguientes medidas impositivas para el contribuyente:

i) Aperturar una cuenta bancaria para el legal funcionamiento de la empresa (sic);

ii) Que dicha cuenta bancaria esté domiciliada en la circunscripción territorial donde se preste el servicio; y,

iii) Hacer del conocimiento de la autoridad recaudadora dicha circunstancia.

Ahora bien, este órgano colegiado considera que las medidas anteriores, al ser sometidas al test de proporcionalidad normativa, no resultan adecuadas o racionales para constituir un medio apto que conduzca al fin u objetivo perseguido.

A) Análisis de racionalidad de la medida reclamada conforme a un instrumento entre los medios utilizados y el fin pretendido.

En efecto, la apertura de una cuenta bancaria, a juicio de este tribunal de amparo, no abona en favor de un mecanismo razonable y concreto que permita una mejor recaudación del impuesto sobre nóminas –lo cual pondría de manifiesto su carácter racional–, pues su escrutinio no revela en qué forma podría beneficiar a la autoridad recaudadora, o bien, facilitar a la empresa contribuyente el cumplimiento de su obligación sustantiva.

Es así, pues en principio la obligación que prevé el citado dispositivo legal constriñe, para el pago del tributo, al empleo de medios electrónicos a través de formas autorizadas por la autoridad recaudadora y no por medio de cuentas bancarias, lo que evidencia una falta de consecución con la obligación de aperturar una cuenta bancaria domiciliada en el Estado.

Luego, más allá de que no puede circunscribirse a los contribuyentes a dar cumplimiento a su obligación de pago utilizando exclusivamente un medio financiero específico, como sería verificar el pago de la contribución respectiva a partir de una cuenta bancaria previamente domiciliada en el lugar donde se preste el servicio (personal y subordinado), lo cierto es que el empleo de medios electrónicos presupone el acceso a un sistema (de banca o servicios financieros electrónicos) que permiten, por antonomasia flexibilidad y accesibilidad sin importar en dónde se encuentre domiciliada la cuenta bancaria de origen.

Por el contrario, el legislador debe permitir que los gobernados cumplan con sus obligaciones de pago a través del medio financiero que éstos elijan, siempre que el pago de su contribución pueda identificarse monetariamente.

Aunado a ello, de ser el caso en que el contribuyente pretenda cumplir su obligación tributaria a través del sistema bancario nacional, resulta carente de toda lógica y razonabilidad constreñirlo a aperturar una cuenta domiciliada en el Estado de Quintana Roo, pues hoy día el manejo de los fondos o recursos no se encuentra sujeto a regulaciones locales que entorpezcan el pago del impuesto correspondiente.

Por ende, si a través de dicha medida no se podría alcanzar un mejor o más ágil sistema de recaudación, debe estimarse que la obligación en comento no es idónea para tal fin y, por tanto, constreñir en tal sentido al contribuyente resulta del todo excesivo, máxime que el legislador condiciona, incluso, el propio funcionamiento de la empresa o establecimiento fuera de toda proporción que es ajena a una obligación formal o periférica a la obligación sustantiva tributaria.

B) Análisis de racionalidad de la medida reclamada conforme a las cargas que le impone al contribuyente.

Por otra parte, este órgano colegiado considera que la obligación establecida en el párrafo cuarto del artículo 43 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo es excesiva y no es razonable en relación con las cargas que se imponen al contribuyente.

Se afirma lo anterior, ya que la imposición de abrir una cuenta bancaria implica que el contribuyente se vea obligado a soportar las siguientes cargas:

a) Celebrar un contrato bilateral con una institución bancaria "autorizada", en la que deberá sujetarse a otras obligaciones con un tercero;

b) Sujeción a una normativa diversa a la fiscal y, por ende, la adquisición de obligaciones en materia bancaria;

c) El destino de recursos en efectivo para la apertura de la cuenta en la cantidad que unilateralmente le imponga la institución bancaria "autorizada", lo cual, desde luego, constituye una erogación económica adicional al tributo;

d) La erogación de servicios bancarios como manejo de cuenta y comisiones que constituyen cargas económicas; y,

e) El destino de recursos económicos suficientes para mantener vigente la cuenta y poder cumplir con la obligación impuesta.

En ese sentido, es claro que la obligación formal establecida en la porción normativa en análisis, impone al contribuyente erogaciones adicionales al tributo, así como la adquisición de nuevas obligaciones y la sujeción a una normativa diversa, como es la bancaria.

Lo anterior, sin que medie un motivo razonable a fin de que se cumpla con el tributo o se verifique alguna finalidad de éste, lo cual hace concluir a este tribunal que se trata de una medida excesiva y arbitraria que causa perjuicio al contribuyente, por lo que, desde luego, no aprueba el test de proporcionalidad normativa derivado de los artículos 14 y 16 constitucionales.

Así las cosas, por las razones apuntadas, es de concluirse que el artículo 43, párrafo cuarto, de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo es inconstitucional al establecer la obligación de abrir una cuenta bancaria domiciliada en el Estado, por ser contraria a los principios de legalidad y razonabilidad legislativa previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

En el mismo sentido se pronunció este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver los amparos en revisión **********, **********, ********** y **********, en sesión de ********** los dos primeros, ********** el tercero y ********** el último, todos de dos mil catorce.

Es aplicable al caso la tesis sustentada por este órgano jurisdiccional, identificada con la clave XXVII.3o.62 K (10a.) pendiente de publicarse, cuyo rubro y texto son:

"OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN. AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, SU ANÁLISIS DEBE REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—De conformidad con las tesis 1a. XCIX/2006([31])

---

[31] "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LAS OBLIGACIONES FORMALES QUE NO TRASCIENDEN A LA OBLIGACIÓN FISCAL SUSTANTIVA, NO DEBEN ANALIZARSE DESDE LA ÓPTICA DE DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 187. Registro digital: 174853.
• "EQUIDAD TRIBUTARIA. SU ÁMBITO DE APLICACIÓN COMPRENDE DISPOSICIONES LEGALES QUE TRASCIENDEN AL MONTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL DE PAGO, AUNQUE NO AFECTEN

y 1a. XXXIV/2007(*), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la jurisprudencia 2a./J. 183/2004(*), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, los principios de proporcionalidad y equidad tributaria rigen tanto en el escrutinio de obligaciones sustantivas como formales, siempre que en esta última hipótesis repercutan directamente en la obligación sustantiva del impuesto, cuando ello se haga por una modificación en los elementos esenciales de la contribución, o bien, mediante el establecimiento de cualquier otra medida que altere la cantidad que legalmente hubiere correspondido cubrir por su concepto. Por el contrario, la constitucionalidad de las obligaciones exclusivamente formales o perimetrales a la obligación sustantiva no pueden analizarse a la luz de las citadas garantías tributarias, dado que no impactan en el pago del tributo; con todo, dicha limitante no las exime del escrutinio constitucional, por parte de los órganos encargados del Poder Judicial de la Federación, pues en tal caso, como cualquier producción legislativa, las normas que contemplen obligaciones formales tributarias desvinculadas del núcleo del tributo (pago) podrán ser analizadas a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad legislativa que se derivan de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sostener que la citada normatividad –dada su naturaleza– está exenta de control, implicaría impedir su impugnación normativa en detrimento de los gobernados y de la regularidad constitucional".

En esas condiciones, al resultar fundado el agravio, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando.

NOVENO.—Efectos de la concesión del amparo. En términos de la parte final del anterior considerando, con fundamento en el artículo 77, fracción I, así como sus párrafos segundo y último, de la Ley de Amparo,[32] proce-

---

DIRECTAMENTE LA CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 639. Registro digital: 173305.

• "EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO RIGE EN OBLIGACIONES SUSTANTIVAS Y FORMALES, PERO EN ESTA ÚLTIMA HIPÓTESIS ES BÁSICO QUE INCIDA DIRECTAMENTE SOBRE LAS PRIMERAS.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 541. Registro digital: 179587.

[32] "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:

"I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación;

"…

"En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particu-

de conceder a la quejosa recurrente el amparo y protección de la Justicia Federal para el único efecto de que:

• El artículo 43, párrafo cuarto, de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, sea desvinculado de la esfera jurídica de la quejosa; esto es, que ninguna autoridad de cualquier ámbito de gobierno le obligue a que, para su legal funcionamiento, deba aperturar una cuenta en una institución bancaria debidamente autorizada, domiciliada en la circunscripción territorial donde se preste el servicio, y hacerlo del conocimiento de la autoridad recaudadora de rentas. Esta concesión de amparo deberá ser acatada por cualquier autoridad en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo.[33]

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es infundado el incidente de incompetencia por declinatoria planteado por el gobernador del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo expuesto en el primer considerando de esta ejecutoria.

SEGUNDO.—Es infundada la revisión adhesiva interpuesta por el secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente ejecutoria.

TERCERO.—En la materia de la revisión principal, se modifica la sentencia recurrida.

CUARTO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto reclamado a la Legislatura, gobernador, secretario de Gobierno, director general del Periódico Oficial y secretario de Finanzas y Planeación (en su actual denominación), todos del Estado de Quintana Roo, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación, en sus respectivos ámbitos de competencia, del Decreto 307, mediante el cual se adicionan y reforman diversos preceptos de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, específicamente por lo que se refiere a su artículo 42.

---

lares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.
"...
"En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley."

[33] "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo."

QUINTO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de los actos reclamados a la Legislatura, gobernador, secretario de Gobierno, director general del Periódico Oficial y secretario de Finanzas y Planeación (en su actual denominación), todos del Estado de Quintana Roo, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación, en sus respectivos ámbitos de competencia, del Decreto 307, mediante el cual se adicionan y reforman diversos preceptos de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, específicamente por lo que se refiere a su artículo 43, cuarto párrafo. Lo anterior, atendiendo a las razones expuestas en el considerando octavo, apartado II y para los efectos precisados en el diverso noveno de la presente ejecutoria.

Notifíquese como corresponda; remítase testimonio de esta resolución y devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y libro electrónico de registro de este tribunal y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por unanimidad de votos de los Magistrados Livia Lizbeth Larumbe Radilla (presidenta) y Juan Ramón Rodríguez Minaya, así como de Edgar Bruno Castrezana Moro (ponente), secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal,[34] con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada, confidencial o datos personales, que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis aislada XXVII.3o.62 K (10a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 9 de enero de 2015 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 1884, con el número de identificación XXVII.3o.11 A (10a.).

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

[34] Sesión de dieciséis de abril de dos mil trece, según oficio CCJ/ST/1444/2013 de la propia fecha, signado por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De conformidad con las tesis 1a. XCIX/2006(*) y 1a. XXXIV/2007(*), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con la jurisprudencia 2a./J. 183/2004(*), emitida por su Segunda Sala, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad rigen tanto en el escrutinio de obligaciones sustantivas como en el de las formales, siempre que en esta última hipótesis repercutan directamente en la obligación sustantiva del impuesto, cuando ello se haga por una modificación en los elementos esenciales de la contribución, o bien, mediante el establecimiento de cualquier otra medida que altere la cantidad que legalmente hubiere correspondido cubrir por su concepto. Por el contrario, la constitucionalidad de las obligaciones exclusivamente formales o perimetrales a la obligación sustantiva no pueden analizarse a la luz de los citados principios tributarios, dado que no impactan en el pago del tributo; con todo, dicha limitante no exime a éstas del escrutinio constitucional por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación, pues en tal caso, como cualquier producción legislativa, las normas que contemplen obligaciones formales tributarias desvinculadas del núcleo del tributo (pago) podrán ser analizadas a la luz de los principios de legalidad y razonabilidad legislativa, que derivan de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sostener que la citada normatividad –dada su naturaleza– está exenta de control, implicaría impedir su impugnación en detrimento de los gobernados y de la regularidad constitucional.

(*) Las tesis 1a. XCIX/2006, 1a. XXXIV/2007 y 2a./J. 183/2004 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 187; Tomo XXV, febrero de 2007, página 639, y Tomo XXI, enero de 2005, página 541, con los rubros: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. LAS OBLIGACIONES FORMALES QUE NO TRASCIENDEN A LA OBLIGACIÓN FISCAL SUSTANTIVA, NO DEBEN ANALIZARSE DESDE LA ÓPTICA DE DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", "EQUIDAD TRIBUTARIA. SU ÁMBITO DE APLICACIÓN COMPRENDE DISPOSICIONES LEGALES QUE TRASCIENDEN AL MONTO DE LA OBLIGACIÓN FISCAL DE PAGO, AUNQUE NO AFECTEN DIRECTAMENTE LA CONFIGURACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN." y "EQUIDAD TRIBUTARIA. ESTE PRINCIPIO RIGE EN OBLIGACIONES SUSTANTIVAS Y FORMALES, PERO EN ESTA ÚLTIMA HIPÓTESIS ES BÁSICO QUE INCIDA DIRECTAMENTE SOBRE LAS PRIMERAS.", respectivamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o. J/26 (10a.)

Amparo en revisión 82/2014. Servicios de Personal de Hotelería, S. de R.L. de C.V. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Amparo en revisión 118/2014. Integración Dinámica Gca, S.A. de C.V. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Amparo en revisión 112/2014. Servicios Hoteleros de Punta Cancún, S. de R.L. de C.V. 24 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón.

Amparo en revisión 176/2014. Servicios Hoteleros Rmaya One, S. de R.L. de C.V. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón.

Amparo en revisión 104/2014. Administración Corporativa Laguna, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.

RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA.

AMPARO DIRECTO 565/2014. 15 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAFAEL MARTÍN OCAMPO PIZANO. SECRETARIA: ANGÉLICA DEL CARMEN ORTUÑO SUÁREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Son parcialmente fundados pero insuficientes y, en lo restante, infundados, los motivos de inconformidad vertidos por el quejoso.

Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, **********, por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo federal contra la resolución contenida en el oficio número **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce, emitida por el **********, por medio de la cual ordena hacer efectiva la garantía consistente en el billete de depósito número **********, por el monto de $**********.

Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil catorce, el Magistrado instructor emitió una prevención al promovente, bajo el apercibimiento que de no cumplimentarla se tendría por no presentada la demanda.

A través del ocurso recibido el dos de junio de dos mil catorce en la referida oficialía de partes, el promovente pretendió dar cumplimiento a la prevención precisada en el párrafo anterior, del que se dio cuenta por auto de cuatro de junio de dos mil catorce, donde se tuvo por incumplido el requerimiento y, en consecuencia, por no presentada la demanda.

Inconforme con el proveído emitido por el Magistrado instructor, el promovente interpuso recurso de reclamación por escrito presentado ante la oficialía de partes de la Sala responsable el siete de julio de dos mil catorce, el cual, previo trámite de ley, fue resuelto el cinco de septiembre del dos mil catorce, en el sentido de confirmar el proveído reclamado.

La resolución referida en el párrafo que antecede constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa, en donde se hacen valer los conceptos de violación que a continuación se analizan, en orden distinto al

propuesto y en forma conjunta, los que guardan estrecha relación, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo.

Es pertinente establecer que en la demanda se hacen valer argumentos en donde se cuestiona la constitucionalidad del artículo 15, fracción VI y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo, tal impugnación parte de la interpretación que de dicho numeral hizo la autoridad responsable, lo que lleva a establecer la necesidad de que, previo al estudio de constitucionalidad, se realice el inherente al criterio interpretativo del precepto en comento.

Este tribunal externa su afinidad con la siguiente jurisprudencia proveniente de los Tribunales Colegiados de Circuito, que presenta los siguientes datos de localización, rubro y texto:

"Novena Época
"Registro digital: 163236
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XXXIII, enero de 2011
"Materia(s): Común
"Tesis: I.7o.A. J/62
"Página: 2831

"AMPARO DIRECTO. CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDÓ EL ACTO RECLAMADO, QUE POR REGLA GENERAL SON DE ESTUDIO PREFERENTE, DEPENDEN DE LA INTERPRETACIÓN QUE DE ELLA REALIZÓ LA RESPONSABLE, POR EXCEPCIÓN, DEBE ANALIZARSE ÉSTA PRIMERO.—Atendiendo al principio de prelación, por regla general, en el juicio de amparo directo es de estudio preferente el aspecto de inconstitucionalidad de la norma en que se fundó el acto reclamado, pues de considerarse fundado, se concederá la protección de la Justicia Federal para que se deje insubsistente el fallo y se emita otro que la autoridad responsable ya no podrá fundar en la misma disposición, generando mayores beneficios que una protección de garantías por aspectos de legalidad, para lo cual, debe precisarse si la sentencia combatida se apoyó en la norma que se tilda de inconstitucional, ya que el supuesto contrario acarrearía la inoperancia de los argumentos planteados; sin embargo, esta regla tiene una excepción, cuando los conceptos de violación del planteamiento de inconstitucionalidad dependen de la interpretación que realizó la responsable a la norma impugnada pues, desde luego, corresponderá en primer término que el tribunal confirme el criterio

interpretativo, ya que, si con motivo del cuestionamiento de legalidad, del cual depende el de constitucionalidad, el órgano jurisdiccional en amparo alcanza una conclusión distinta de aquella que sostuvo la responsable para sustentar su fallo, es obvio que en este nuevo pronunciamiento ya no existirá motivo alguno para que se analice el tópico de constitucionalidad de leyes, dando lugar a conceder el amparo para que se deje insubsistente el fallo y se emita una nueva resolución con base en la interpretación que del numeral controvertido fije el órgano colegiado en amparo."

Concepto de violación primero y parte conducente del segundo.

Indebida resolución de los argumentos expresados contra la legalidad del acuerdo de prevención emitido en el juicio.

Hace valer el quejoso que acepta el hecho de que entre los supuestos de procedencia para el recurso de reclamación, establecidos en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no se encuentra el acuerdo por el que se emite una prevención en el juicio, pero estima que ello no impide su impugnación al controvertirse el proveído que tiene por no presentada la demanda, ya que este último se funda precisamente en él.

Que bajo el criterio asumido por la autoridad responsable, se le deja en estado de indefensión al no permitirle la impugnación del acuerdo por el que se llevó a cabo el requerimiento que se estimó incumplido.

Estima que, en el caso, carece de sustento legal la prevención de mérito, toda vez que desde el escrito de demanda quedó de manifiesto su desconocimiento de la constancia de notificación de la resolución impugnada, al provenir de un procedimiento que considera ilegal, siendo que el artículo 15, fracción VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es aplicable solamente en los casos donde en la demanda se haga constar que no se recibió la constancia de notificación o que ésta se llevó a cabo por correo, sin que en el caso se actualizara alguno de esos supuestos.

Que si la prevención se sustenta en la estimación de que la demanda resultaba oscura, la legalidad del acuerdo emitido por el Magistrado instructor dependía de la cita del artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, sin que se cumpliera con ello en el proveído emitido.

Son parcialmente fundados, pero insuficientes, los motivos de inconformidad que se analizan.

Los artículos 58-3, 58-9, 59 y 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, son del texto siguiente:

"Artículo 58-3. La tramitación del juicio en la vía sumaria será improcedente cuando:

"I. Si no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 58-2;

"II. Simultáneamente a la impugnación de una resolución de las señaladas en el artículo anterior, se controvierta una regla administrativa de carácter general;

"III. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos o de sanciones por responsabilidad resarcitoria a que se refiere el capítulo II del título V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

"IV. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual;

"V. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, incluyan alguna otra carga u obligación, o

"VI. El oferente de una prueba testimonial, no pueda presentar a las personas señaladas como testigos.

"En estos casos el Magistrado instructor, antes de resolver sobre la admisión de la demanda, determinará la improcedencia de la vía sumaria y ordenará que el juicio se sig a conforme a las demás disposiciones de esta ley y emplazará a las otras partes, en el plazo previsto por los artículos 18 y 19 de la misma, según se trate.

"Contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, podrá interponerse el recurso de reclamación ante la Sala Regional en que se encuentre radicado el juicio, en el plazo previsto por el artículo 58-8 de esta ley."

"Artículo 58-9. Las medidas cautelares, se tramitarán conforme a las reglas generales establecidas en el capítulo III de esta ley. El Magistrado instructor estará facultado para decretar la resolución provisional o definitiva que corresponda a las medidas cautelares.

"Contra la resolución del Magistrado instructor dictada conforme al párrafo anterior procederá el recurso de reclamación ante la Sala Regional en la que se encuentre radicado el juicio."

"Artículo 59. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate."

"Artículo 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. …"

En el juicio contencioso administrativo federal se regula el recurso intraprocesal especificado como de "reclamación", a través del cual, pueden controvertirse resoluciones de trámite emitidas, ya sea por el Magistrado instructor, o bien, por la Sala, que para efectos de practicidad pueden agruparse de la siguiente forma:

Resoluciones emitidas por el Magistrado instructor susceptibles de controvertirse en el recurso de reclamación.

1. Tratándose de la demanda, la contestación, la ampliación, la contestación a la ampliación o una prueba, procede contra la resolución que la admita, deseche o tenga por no presentada.

2. Por cuanto hace al sobreseimiento antes del cierre de la instrucción en el juicio, procede contra la resolución que lo decrete o niegue.

3. En lo que atañe al tercero interesado, procede contra la resolución que admita o rechace su intervención.

4. Respecto de la determinación de la vía sumaria, procede contra el acuerdo que declare su improcedencia.

5. Procede contra la resolución que conceda, niegue, modifique o revoque la medida cautelar, ya sea provisional o definitiva.

Resoluciones emitidas por la Sala impugnables en el recurso de reclamación.

1. Las resoluciones que decreten medidas cautelares positivas.[5]

Es preciso tomar en consideración que para salvaguardar el cumplimiento de la garantía de acceso completo y eficaz a la impartición de justicia, prevista por el numeral 17 de nuestra Carta Magna, especialmente tratándose de los órganos primarios, no puede limitarse la procedencia del recurso para un supuesto de entre diversos que conllevan similares consecuencias; razón por la cual, la materia de impugnación en el recurso en comento no debe delimitarse bajo una interpretación literal de la norma, sino que debe hacerse extensiva a los casos análogos a los expresamente delimitados por el legislador.

Es procedente citar, por analogía, la siguiente tesis emitida por Nuestro Más Alto Tribunal, que presenta los siguientes datos de localización, rubro y texto:

"Novena Época
"Registro digital: 200152
"Instancia: Pleno
"Tesis: aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: III, abril de 1996
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Tesis: P. LVIII/96
"Página: 126

"RECLAMACIÓN EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE ESE RECURSO SÓLO PARA LOS ACUERDOS QUE DESECHAN UNA DEMANDA DE NULIDAD, Y NO EN CONTRA DE LOS

[5] En el entendido de que conforme al artículo 26 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es la Sala y no el Magistrado instructor quien resuelve sobre este tipo de medidas cautelares en particular, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 26. La Sala Regional podrá decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo."

QUE LA TENGAN POR NO INTERPUESTA.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en diversos criterios jurisprudenciales, que el juicio administrativo debe contener las condiciones que faciliten al particular la aportación de elementos en que funda su derecho. Si de lo dispuesto en el artículo 242 del Código Fiscal de la Federación se llega a establecer que el recurso de reclamación sólo es procedente contra el auto que desecha una demanda y no contra aquel que la tiene 'por no interpuesta', esa reglamentación pugna con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, porque al limitar el uso del recurso a un supuesto de entre varios que tienen similares consecuencias, priva al interesado del derecho a la impartición de justicia, en tanto que le impide el acceso a los órganos primarios de justicia, resultando, en consecuencia, violatorio de las garantías de debido proceso legal y de audiencia. Por tanto, como en el código referido no existe una regla que señale con toda precisión la diferencia entre los términos 'desechar' y 'tener por no interpuesta', evidentemente se trata de situaciones análogas contra las que, por igualdad de razón, debe tramitarse el recurso de reclamación como medio ordinario de defensa."

Este tribunal es coincidente con el razonamiento esencial establecido en la siguiente jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito:

"Novena Época
"Registro digital: 188370
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XIV, noviembre de 2001
"Materia(s): Administrativa
"Tesis: VI.3o.A. J/5
"Página: 458

"RECLAMACIÓN. PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 242 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SÓLO CONTRA RESOLUCIONES EXPRESAMENTE CONSIGNADAS EN ÉL, SINO TAMBIÉN CONTRA AQUÉLLAS DE NATURALEZA ANÁLOGA.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció criterio en cuanto a que la interpretación del citado precepto no debe hacerse de manera limitativa sino amplia, en aras de la garantía de defensa del contribuyente, y si bien esa interpretación surgió a la luz del texto de la ley vigente en mil novecientos noventa y cuatro (que no contemplaba expresamente la reclamación cuando se tenía por no

interpuesta la demanda), con posterioridad el legislador adecuó el contenido del artículo al espíritu de ese criterio judicial (ahora sí lo prevé para el caso referido), de donde se advierte que el recurso de reclamación en el juicio fiscal procede no sólo contra las resoluciones referidas en él, sino en todos los casos donde los temas giren sobre tales puntos; de manera que si dicho recurso procede contra las determinaciones expresamente referidas, de igual forma resultará procedente en casos no previstos pero análogos."

En el caso, la Sala responsable emitió el siguiente pronunciamiento:

"**A criterio de los Magistrados integrantes de esta Sala, el argumento referido se considera inatendible.**—Por principio, cabe precisar que el auto materia de impugnación en la presente instancia, lo es el de cuatro de junio de dos mil catorce, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda, por estimar que el actor no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en el diverso proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce.—En ese contexto, el requerimiento formulado al actor mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce **no reviste la materia de impugnación, de conformidad con lo que establece el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo** sino, como se dijo, lo es el diverso auto de cuatro de junio de dos mil catorce, por el cual se tuvo por admitido el citado medio de defensa, según consta en el proveído de nueve de julio del año en curso.—A fin de evidenciar lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 59 antes referido, que establece: 'Artículo 59. (se transcribe).'.—Del precepto legal que antecede se advierte que el recurso de reclamación únicamente procede contra las resoluciones del Magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción, así como las que admitan o rechacen a un tercero.—Ahora bien, en el caso, del contenido de los argumentos formulados por el accionante en el segundo agravio, se advierte: a) Que no controvierten de manera directa la determinación del Magistrado instructor en la que tuvo por no presentada la demanda.—b) Que, por el contrario, van encaminados a controvertir el **requerimiento previo a admitir**, contenido en el proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce, que formuló el Magistrado instructor.—Sin embargo, el requerimiento previo a admitir no puede ser materia de análisis, ya que el recurso de reclamación únicamente procede respecto de los supuestos que establece el artículo 59 de la ley adjetiva en cita, dentro de los cuales no está el requerimiento previo a admitir.—Así las cosas, de las constancias que obran en autos se deduce que la materia

de la litis en el presente recurso lo es el proveído de cuatro de junio de dos mil catorce, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de nulidad y no el requerimiento formulado en proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce.—De ahí que sean inatendibles los argumentos del actor contra el aludido requerimiento, ya que este último no es impugnable por vicios propios en vía de reclamación."

No es objetivamente correcta la determinación de la Sala al calificar de inatendibles los agravios expresados por el recurrente, mediante los cuales cuestionó la legalidad del acuerdo recurrido, al impugnar a su vez la legalidad del proveído que constituía su antecedente inmediato.

Se pondera el hecho de que el acuerdo por el cual el Magistrado instructor emite una prevención en el juicio contencioso administrativo, no se ubica entre las hipótesis legales que expresamente regulan los numerales antes citados, ni puede considerarse un caso análogo a dichas hipótesis; no obstante, deben tomarse en consideración las circunstancias que distinguen el caso en particular.

En efecto, el acuerdo expresamente materia de la reclamación en el juicio de nulidad del que emanó el acto reclamado, es el proveído de cuatro de junio de dos mil catorce por el que se tuvo por no presentada la demanda, que sí se ubica entre los supuestos literalmente señalados por el legislador como impugnables a través del recurso de reclamación.

Al respecto, es pertinente mencionar que la determinación emitida por el Magistrado instructor de tener por no presentada la demanda, no deriva de un pronunciamiento aislado, sino que constituye la consecuencia aplicada para lo que estimó como el incumplimiento a un requerimiento previo que efectuó al justiciable.

En esa tesitura, el debido análisis de la legalidad del acuerdo por el cual se tuvo por no presentada la demanda, cuando constituye la consecuencia derivada de una prevención contenida en un proveído anterior, no puede acotarse al estudio específico de los motivos y fundamentos que se expresan en el primer acuerdo referido, sino que debe comprender a la propia resolución que le da origen y sustento.

Estimar que el justiciable se encuentra impedido para cuestionar la legalidad del acuerdo que emite la prevención, y que sólo puede verificarse

la legalidad del ulterior auto por el que se tuvo por cumplido o no lo requerido, constituye una violación a la garantía de acceso a la impartición de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que se puntualizan a continuación.

En casos como el que nos ocupa, la declaratoria de tener por no presentada la demanda no constituye una cuestión diversa del ejercicio de ponderación del Magistrado instructor para verificar si se cumplió o no el requerimiento por él emitido, por lo que no resulta aceptable que deba pasarse por el contenido del requerimiento sin poder cuestionar su legalidad y limitar la impugnación a verificar si se cumplió o no un requerimiento que, en sí mismo, puede carecer de sustento acorde al marco legal.

A consideración de este tribunal, no puede aceptarse que únicamente sea susceptible de verificación si se cumplió lo requerido por el Magistrado instructor, excluyendo la posibilidad de dilucidar si el propio requerimiento se apega a derecho, ya que la litis bien puede trascender al hecho de si se cumplió o no lo exigido, o a la circunstancia de controvertir que dicha prevención no debió existir, lo que, desde luego, constituye una cuestión de estudio previo.

Un elemento adicional que sustenta la determinación emitida descansa en el hecho, igualmente precisado con antelación, relativo a que el acuerdo por el que se emite un requerimiento en el juicio contencioso administrativo federal por omisión de requisitos formales en el escrito de demanda, no es impugnable por sí solo, vía recurso de reclamación, que constituye el medio de defensa ordinario establecido por el legislador para dirimir las cuestiones que se susciten en el devenir de la instrucción del juicio, siendo que, acorde con la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, se reserva la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, quedando excluido de ello lo atinente a cuestiones meramente procesales.

Cobra aplicación, por analogía, la siguiente jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal, que presenta los siguientes datos de localización, título, subtítulo y texto:

"Décima Época

"Registro digital: 2006589
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*
"Libro 7, Tomo I, junio de 2014
"Materia(s): Común
"Tesis: P./J. 37/2014 (10a.)
"Página: 39

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).—Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que

equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."

En esa tesitura, si el acuerdo que emite una prevención por omisión de cuestiones formales en el escrito de demanda no es susceptible, por sí solo, de impugnación vía recurso de reclamación y, a su vez, respecto de este tipo de actos la procedencia del juicio de amparo indirecto se reserva para aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos en los términos antes puntualizados, para no dejar en estado de indefensión al justiciable, lo conducente es determinar que sus motivos y fundamentos sí son controvertibles con motivo del oportuno recurso de reclamación que se interponga contra el proveído que dé cuenta con el cumplimiento o incumplimiento de lo requerido, y aplique la consecuencia que el marco legal determine.

Un último argumento que sustenta la conclusión alcanzada recae en el hecho de que los medios de defensa, en general, son creados por el legis-

lador con la finalidad de otorgar a los justiciables elementos que faciliten la defensa de sus derechos, por lo que no deben ser tratados con un rigorismo que los convierta en trampas procesales que, en vez de facilitar, obstaculicen la defensa de tales derechos, como ocurriría de sostener la postura de que en el recurso de reclamación contra el acuerdo en comento no puede cuestionarse la legalidad del requerimiento que dio origen a la consecuencia, sino únicamente constatarse si se cumplió o no lo exigido.

Una vez delimitado el hecho de que en el juicio contencioso administrativo federal seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí es dable que se controviertan los motivos y fundamentos del acuerdo por el que se emite una prevención por presuntas omisiones formales en el escrito de demanda, con motivo de impugnación, vía recurso de reclamación interpuesto contra el auto que tiene por no presentada la demanda por la declaratoria de incumplimiento de lo requerido, es preciso establecer que, aun cuando en un principio la Sala responsable declaró inatendibles los agravios vertidos por el quejoso sobre dicha cuestión, ello no constituye impedimento para que este tribunal resuelva de fondo la legalidad del acuerdo de prevención, en el entendido de que en el propio texto del acto reclamado, paralelo a la declaración de inatendibles de dichos agravios, la responsable emitió un pronunciamiento donde estableció como apegado a derecho el requerimiento de mérito.

En efecto, el quejoso indica que la Sala responsable omitió emitir su pronunciamiento sobre argumentos que controvertían la legalidad del requerimiento emitido, tales como que desde el escrito de demanda quedó de manifiesto el desconocimiento de la forma en que se notificó el acto impugnado y que debía tenerse como tal la del propio procedimiento, y que se brindaron elementos suficientes para admitir de conformidad la demanda, pues al contestarla su contraria se contaría con los elementos para conocer la oportunidad en su presentación, por lo que debió privilegiarse el acceso a la impartición de justicia, sobre la posible duda respecto de dicha cuestión que, de existir, el juzgador debió esperar a que se integrara debidamente la litis.

Si bien el quejoso asume que no fueron contestados dichos argumentos, lo cierto es que sí lo llevó a cabo la autoridad responsable en forma global, al emitir un pronunciamiento sobre la legalidad tanto del acuerdo de requerimiento (aun cuando previamente declaró que quedaba excluido de la materia de estudio del recurso de reclamación), como del propio proveído recurrido, al establecer, entre otras cuestiones, el estudio a través del cual asumió que

dichos actos se ajustaban a lo exigido por los artículos 15, fracción VI y 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reiterando su aplicación al caso concreto, con especial énfasis en justificar la legalidad del requerimiento que fue antecedente inmediato del auto recurrido, en lo que destacó que la aplicación del principio pro persona no implica ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia para el medio de defensa respectivo.

Aun soslayando lo anterior, lo cierto es que el requerimiento emitido por el Magistrado integrante de la Sala responsable es legal, por lo siguiente:

Es oportuno citar los artículos 15, fracciones I, V, VI y penúltimo párrafo, así como 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:

"Artículo 15. El demandante deberá adjuntar a su demanda:

"I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

"...

"V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

"VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.

"...

"Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las

fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas. …"

"Artículo 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:

"I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. …"

Los artículos en cita prevén lo conducente con relación a la información y documentación que el actor debe aportar al promover la demanda, respecto de la notificación del acto impugnado, que por orden lógico podemos establecer de la siguiente forma:

Si se cuenta con la constancia de notificación debe exhibirse como anexo al escrito de demanda, con su respectiva copia de traslado para el emplazamiento de ley; nótese que el precepto legal no distingue la forma en que se haya llevado a cabo la notificación, ya que no se hace privativa al hecho de que provenga de una notificación efectuada en forma personal, sino que se enfoca en el hecho de que la constancia respectiva obre en poder del justiciable.

Por exclusión del supuesto referido en el párrafo anterior, para el caso de que no se haya recibido la constancia de notificación (sin importar la forma en que ésta se haya practicado), o que haya sido realizada por correo, se establecen dos obligaciones a cargo del justiciable, consistentes en:

1. Precisar en el escrito de demanda que no se recibió la constancia de notificación o que se practicó por correo, según corresponda; y,

2. Señalar la fecha en que se practicó la notificación.

El cumplimiento, ya sea de aportar la constancia de notificación, en caso de contar con ella, o bien, señalar que no se recibió o que se practicó por correo, precisando la fecha en que se conoció el acto, cumple la mayor

importancia, ya que de ello depende la constatación inicial de la oportunidad en la presentación del medio de defensa, lo que constituye una carga procesal que corresponde al demandante, sin detrimento de que con motivo de la contestación la contraria podrá alegar lo que a su derecho corresponda sobre dicha cuestión.

Finalmente, el artículo 16, fracción I, de la ley citada regula que si el demandante alega conocer la resolución impugnada y estima que su notificación no se apegó a derecho, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la propia resolución deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció, lo que denota una vez más la importancia de especificar la fecha de conocimiento del acto de autoridad controvertido.

El escrito de demanda que dio origen al juicio de nulidad del que emanó el acto reclamado, comprende el siguiente texto:

"H. Magistrados de la H. Sala Regional del Caribe en turno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el Estado.—Presentes.—Demanda de nulidad.—Escrito inicial.—**********, por mi propio derecho y en mi carácter de contribuyente con R.F.C. **********, con domicilio para recibir notificaciones el ubicado en **********, autorizando para oírlas y recibirlas en los términos amplios del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, a los Sres. Lics., **********, con cédula profesional registrada con el número ********** del libro **********; **********, con cédula profesional registrada a fojas **********, con el número ********** del libro **********, y **********, con cédula profesional registrada con el número **********, foja ********** del libro **********; todos ante la H. Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de ese tribunal, así como a los pasantes de derecho ********** y **********, quienes podrán actuar conjunta o separadamente, ante ustedes con todo respeto comparezco y expongo: Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 51, fracciones IV, V y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vengo a demandar la nulidad de la resolución de 17 de febrero de 2014, que deriva del oficio número: **********, de 18 de octubre de 2013, dictado por el **********, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual resolvió el la (sic) solicitud de devolución del billete de depósito que refiero en líneas posteriores; misma que se considera improcedente e ilegal por las razones que se expresan más adelante.—En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se proporcionan los siguientes datos: I. Nombre del demandante y domicilio para oír y recibir notificaciones: **********; con

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********, y con correo electrónico para sustanciar el juicio a través del sistema en línea (**********).—II. Resolución impugnada: Resolución administrativa de 17 de febrero de 2014, emitida por el **********, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con domicilio conocido en la entidad.—III. Autoridad demandada: **********.—IV. Hechos que motivan la demanda: 1. El suscrito el 2 de febrero de 2011, realizó trámites migratorios en favor de **********, presentado ante la delegación federal demandada como garantía de esos trámites el billete de depósito número **********, por un monto de $**********, (**********).—2. Así las cosas, transcurrido el tiempo, mediante oficio número **********, de 18 de octubre 2013, mismo que se exhibe y acompaña como anexo uno, la autoridad demandada hizo del conocimiento del suscrito, que toda vez que de las constancias de autos no se tiene solicitud de devolución del billete de depósito referido por parte del suscrito, me concedió un plazo de diez días hábiles para que se acudiera a las oficinas de la demandada a exponer lo que a mi interés conviniera.—3. Posteriormente, por ocurso de 13 de noviembre de 2013 solicité formalmente la devolución de dicho billete de depósito, toralmente en los siguientes términos: Que por medio del presente ocurso y para todos los efectos legales a que haya lugar, al tenor de lo dispuesto por el (sic) artículo (sic) 8o. constitucional; 1, 17, 18, 26 y demás relativos aplicables de la Ley (sic) de la Administración Pública Federal; I, II, (sic) 38, 39 y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, vengo en tiempo y forma a referirme al requerimiento hecho por esta institución por oficio número **********, de 18 de octubre de 2013, mediante el cual se me hace saber que a la fecha no existe requerimiento de mi parte para la devolución del billete de depósito número **********, mismo que fuera exhibido por esta parte como garantía para la tramitación del asunto afecto, mismo que solicito me sea devuelto debidamente endosado en mi favor, ello para evitar que dicha cantidad sea aplicada al erario público, como se detalla en el oficio en comento y al cual se da contestación, el que solicito me sea devuelto por conducto de los autorizados para ello.—4. Hecho lo anterior, la autoridad demandada, de nueva cuenta, por oficio de 21 de noviembre de 2012 (sic), me requiere de nuevos requisitos, sin embargo, esta parte rinde por ocurso de 11 de diciembre de 2013 la debida contestación, toralmente en los siguientes términos: Que por medio del presente ocurso y para todos los efecto legales a que haya lugar, con relación a la prevención ordenada por oficio de 21 de noviembre del 2012, el cual ya obra en constancias debidamente cumplimentado, al efecto, llamo la atención de esta autoridad administrativa en el sentido de que esta parte dio cabal cumplimiento al requerimiento de 18 de octubre de 2013, solicitando la devolución del billete de depósito afecto a los hechos, sin embargo, de nueva cuenta se me requieren diversos requisitos al requerimiento inicial, se explica: En efecto, por oficio de

18 de octubre de 2013, con folio **********, esta dependencia de migración hizo del conocimiento de este accionante, que se tenía en resguardo el billete de depósito **********, que fuera depositado por el suscrito para garantizar el trámite ahí señalado, el cual fue autorizado por la entonces directora de la dependencia, y que para esa fecha no existe solicitud de devolución; de ahí que esta parte, por ocurso de 13 de noviembre de 2013, promoviera esa devolución, adjuntando los documentos que al efecto me fueran requeridos y consistentes en: solicitud de trámite migratorio, identificación de apoderados y testigos, identificación de depositante y copia de billete de depósito, escrito personal de devolución de fianza, tal como consta en el expediente en que se actúa.—En el anterior orden de ideas, es inconcuso que se encuentra colmado el requerimiento que ahora se me realiza mediante el oficio de 21 de noviembre de 2012, de acuerdo al Manual de criterios y trámites migratorios publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2010, lo que se desprende del contenido del oficio multicitado de 18 de octubre de 2013, que en lo que aquí interesa, señala que el billete de depósito **********, fue exhibido como garantía dentro del trámite migratorio de internación de **********, de nacionalidad cubana, mismo que fue autorizado el 2 de febrero de 2011, mediante oficio **********, lo que contradice el actual requerimiento de exhibir negativa del trámite, constancia de no uso de la autorización del trámite y/o desistimiento del trámite, razón suficiente para ordenar que el billete de depósito me sea devuelto debidamente endosado en mi favor sin más trámite que la razón que por su recepción se deje en autos, atento a las consideraciones vertidas.—5. Por último, la autoridad demandada emite la resolución que por esta vía se combate, de 17 de febrero de 2014, en la cual, toralmente determina hacer efectiva la garantía en favor de la Tesorería de la Federación.—V. Pruebas: Esta parte procesal ofrece las siguientes: Prueba 1. La documental pública, consistente en todo lo actuado en el trámite administrativo que diera inicio mediante oficio número **********, de 18 de octubre de 2013, solicitando de esta H. Sala Fiscal se tenga a bien ordenar se requiera a la demandada para que remita las constancias de mérito a la brevedad posible.—No se omite que las mismas se exhiben en copia simple a la presente.—2. La instrumental de actuaciones, en todo aquello que favorezca al suscrito.—3. La presuncional legal y humana, en todo aquello que favorezca al suscrito.—VI. Conceptos de impugnación.—En la resolución de 17 de febrero de 2014, que por esta vía se reclama, la autoridad demandada fue incorrecta al resolver en el considerando segundo, que fui omiso en presentar la documental que acredite el cumplimiento del inciso b) del numeral 14.2, del Acuerdo por el cual se expide el manual de criterios y trámites migratorios del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2010; y en el considerando cuarto, que dicho billete fue para garantizar que una vez que haya vencido el permiso que se le

entregó al (a la) extranjero (a) para regresar a su territorio nacional, lo cual no aconteció y que fue consentido por el promovente al no presentar los requisitos antes citados y con ello hacerlo efectivo al erario público, criterio éste que adolece de la debida fundamentación y motivación, si se advierte por esta Superioridad, que se actualizan los supuestos del artículo 51, fracción IV, de la ley de la materia, dado que no era requisito válido el exhibir los supuestos del manual de criterios y trámites migratorios y sí, en cambio, debió acordarse favorable la devolución del billete de depósito afecto, se explica: Esta parte exhibió el billete de depósito para garantizar el trámite migratorio, sin que la exhibición estuviera supeditada o fuera para garantizar daño alguno, lo que no consta en el acuerdo por el cual se tuvo la recepción del mismo, tan es así que la misma autoridad demandada hizo del conocimiento de esta parte que a la fecha no obra en constancias solicitud de devolución, sin más; de ahí que esta parte procediera a solicitar su devolución, lo que no valoró la demandada y sí, en cambio, evoca que por ocurso diverso requiere de la exhibición de esos requisitos del Manual de criterios y trámites migratorios, cuando sólo procede la solicitud de devolución y su endoso en mi favor, ya que esos requisitos, que a su decir no se colman, constituyen una situación que no puede influir en la negativa de su parte para devolver el billete de depósito, y que si bien está relacionado con el trámite, como se dijo, ello no fue exhibido para garantizar algún daño que incluso no se causó y sólo fue un requisito de procedibilidad como se verá.—En efecto, el criterio de la demandada de los requisitos que expone y que a su decir no se colmaron, no satisface la exégesis normativa de la debida fundamentación y motivación, vuelve el acto ilegal y, con ello, actualiza su nulidad lisa y llana, si se advierte que la intromisión posterior de esos requisitos no es imputable al suscrito, ya que a la fecha el trámite está concluido en la etapa que resultó y sólo resta su culminación, sin que en parte alguna se advierta que el billete de depósito deba ser entregado al erario en mi perjuicio, razón suficiente para declarar la nulidad lisa y llana del acto reclamado.—VII. Terceros interesados: no existen.—VIII. Lo que se pide: Nulidad lisa y llana del acto reclamado e impugnado por esta vía.—Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta H. Sala Regional, atentamente pido se sirva: Primero. Tenerme por presentado en términos del presente escrito, interponiendo demanda de nulidad en contra del acto que se señala en el proemio del presente ocurso.—Segundo. Tener por señalado domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el que se indica en el proemio de este escrito, y por autorizadas a las personas que se mencionan en el mismo apartado.—Tercero. Admitir a trámite la presente demanda y por ofrecidas y exhibidas las pruebas mencionadas en el capítulo respectivo de la presente demanda.—Cuarto. Previos los trámites procesales, dictar resolución a los intereses de la parte actora, declarando la nulidad de la resolución que se combate, para los efectos señalados."

En el escrito inicial de demanda se señaló como acto impugnado el oficio número **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce, emitido por el **********, por medio del cual, ordena hacer efectiva la garantía consistente en el billete de depósito número **********, por el monto de **********.

Un elemento a destacar consiste en que, al menos a la data de presentación del escrito de demanda,[6] el demandante tenía conocimiento completo del contenido del acto impugnado, lo que se basa en dos razonamientos sustanciales, donde el primero de ellos consiste en que exhibió copia de éste como anexo a la demanda; el segundo, en que expresó los conceptos de impugnación por los cuales controvierte directamente los motivos y fundamentos que lo sustentan.

En ese orden de ideas, es válido afirmar que ante el conocimiento completo del contenido del acto de autoridad, el ahora quejoso se encontraba en legal aptitud de promover el juicio contencioso administrativo federal.

En el escrito inicial de demanda no existe señalamiento alguno por parte del ahora quejoso, donde controvierta la notificación del acto impugnado, ya sea por haberse realizado en contravención al marco aplicable, o bien, por no existir tal notificación, ya que al respecto, incluso es omiso en especificar la data de su conocimiento, pues en el hecho cinco de la demanda se limitó a manifestar:

"5. Por último, la autoridad demandada emite la resolución que por esta vía se combate, de 17 de febrero del 2014, en la cual toralmente determina hacer efectiva la garantía en favor de la Tesorería de la Federación."[7]

De lo anterior se advierte que el ahora quejoso se limitó a expresar la fecha de emisión de la resolución impugnada, no así la de su respectiva notificación o aquella en que tuvo conocimiento del acto impugnado.

En el proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce, donde se dio cuenta con el escrito inicial de demanda, el Magistrado instructor emitió el siguiente pronunciamiento:

---

[6] Trece de mayo de dos mil catorce, según se advierte del sello franqueador que obra en su primera foja.
[7] Foja 3 del juicio de nulidad.

"Aclarado lo anterior, con fundamento en los artículos 38, fracciones XII y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 15, fracciones I, V, VI y penúltimo párrafo y 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se **requiere a la actora** para que dentro del término de **cinco días** hábiles, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto: 1) Presente una copia de la demanda y sus anexos para el traslado de ley respectivo; y 2) exhiba ante (sic) la constancia de notificación de la resolución impugnada, o bien, señale la fecha en que se practicó dicha notificación, toda vez que omitió presentar dicho documento o manifestar esa fecha al instaurar su demanda, debiendo presentar también una copia de esa documental o del escrito de cumplimiento de requerimiento para el traslado de ley correspondiente."[8]

Es objetivamente correcto el requerimiento emitido por el Magistrado instructor, en virtud de que tal como se ha puntualizado, con motivo de la presentación del escrito de demanda, no se acompañó como anexo la constancia de notificación del acto impugnado, tampoco se precisó que no se recibió tal constancia o que se practicó por correo, expresando a su vez la data en que tuvo conocimiento de dicha resolución.

No se soslaya el hecho de que el estudio de la demanda debe llevarse a cabo de forma integral y que debe comprender, incluso, sus documentos anexos; sin embargo, ello no implica que el juzgador sustituya al justiciable en su voluntad y cumplimiento de las cargas procesales que le corresponden, máxime que por las particularidades del caso podría ocurrir que el justiciable contara con la constancia de notificación pero omitiera exhibirla, o bien, que no contara con ella, lo que a su vez lo obligaba a especificarlo así en la demanda y comunicar al juzgador la data en que conoció el acto.

Por las razones apuntadas con antelación, se reitera que el Magistrado instructor procedió en apego al marco legal, al emitir la prevención en los términos en que lo hizo, ya que, incluso, brindó a la persona el cúmulo de posibilidades que la norma prevé para el cumplimiento de lo omitido, pues para tales efectos expresó que debía exhibir la constancia de notificación, o bien, señalar la fecha en que ésta se practicó, lo que es congruente con los numerales antes descritos.

---

[8] Foja 12 del juicio de nulidad.

No resulta óbice a lo anterior el hecho de que el quejoso refiera que si el acuerdo de prevención se emitió por oscuridad en la demanda, debió fundarse en el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que del estudio realizado por este tribunal al escrito de demanda del juicio de nulidad en los términos en que fue planteado por el justiciable, se advierte la efectiva omisión en el cumplimiento de las formalidades que el Magistrado instructor advirtió y que, a la postre, la Sala responsable reiteró en el acto reclamado, lo cual justificaba por sí sola la legalidad del acuerdo de prevención en los términos planteados, sin que ello se supedite a la citada vía de aplicación supletoria del precepto en comento.

Parte restante del segundo concepto de violación.

Indebida determinación de confirmar el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda, por no tener cumplido el requerimiento que se le formuló.

El quejoso aduce que el acto reclamado es incorrecto, ya que al cumplimentar el requerimiento precisó que la notificación del acto se llevó a cabo a través de la sección de avisos de la autoridad, por lo cual, obraban en poder de ésta los elementos necesarios para constatar lo conducente a la notificación del acto impugnado.

Aduce que desde el escrito de demanda expresó su desconocimiento de la forma en que se llevó a cabo la notificación, y que la fecha en que ocurrió fue en los términos en que la propia autoridad la realizó a través de la mencionada sección de avisos, por lo cual, era procedente la admisión de la demanda, ya que correspondería a su contraria probar la forma y términos en que se llevó a cabo la notificación para poder determinar finalmente lo conducente con relación a la oportunidad en la presentación de la demanda.

Abunda sobre la cuestión de trato al manifestar que bajo una interpretación del artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con la aplicación del principio pro persona, no existía impedimento real para admitir la demanda, ya que ante la posible duda del instructor sobre la oportunidad de la presentación de la demanda, debió buscar brindar la protección más amplia a la persona, en el entendido de que en el momento procesal oportuno, su contraria tendría la posibilidad de alegar lo que a su derecho conviniera, solicitando incluso el sobreseimiento en el juicio de impugnarse un acto consentido.

Es **infundado** el argumento sujeto a estudio.

El artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece:

"Artículo 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:

"I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció.

"II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.

"III. El tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa.

"Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución.

"Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida."

Las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo federal seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa presentan una notable particularidad en lo que atañe al acto impugnado, pues no se requiere del pleno y completo conocimiento del contenido del acto de autoridad para que sea viable su impugnación, ya que como se regula en la fracción II del artículo 16 en cita, en caso de desconocimiento de la resolución impugnada, aun así el actor puede promover la demanda, cumpliendo para ello con la exigencia de así precisarlo en el escrito de mérito y señalar a la autoridad a quien atribuye su emisión, su notificación o su ejecución.

En lo que atañe a la hipótesis normativa prevista en la fracción I del numeral en estudio, presenta la distinción de que el actor sí tiene conocimiento completo del acto de autoridad, pero estima que su notificación no se apegó

a derecho, ante lo cual, el legislador dispuso que los conceptos de impugnación contra el propio acto, así como contra su notificación, se harán valer en el escrito inicial de demanda.

A lo largo del presente estudio se ha establecido que, previo a la presentación del escrito de demanda, que dio inicio al juicio natural del que emanó el acto reclamado, el ahora quejoso sí tenía conocimiento completo del acto impugnado, ya que incluso lo acompañó como anexo al escrito inicial de demanda, razón por la cual queda de plano excluida la hipótesis legal establecida en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo la aplicable, en su caso, la fracción I de dicho numeral.

Resulta pertinente realizar una breve acotación para especificar que en el supuesto de que el justiciable tenga conocimiento pleno del contenido del acto de autoridad, se da la posibilidad de que promueva el medio de defensa conducente en el caso de que estime que afecta su esfera jurídica.

Se toma en consideración que la notificación no constituye un acto de autoridad, sino la comunicación de uno y si bien, por excelencia es la forma por la cual la autoridad pone del conocimiento del interesado la existencia de una determinación que afecta su esfera jurídica, a través de las modalidades, verbigracia, la notificación personal o por correo, entre otras y bajo las formalidades definidas por el legislador para su legalidad, resulta que no constituye la única forma en que la persona puede llegar a tener conocimiento completo del acto, ya que esto puede ocurrir mediante diversas formas, como sería a través de la obtención de una copia del documento, incluso en un momento previo al en que se lleve a cabo su formal notificación bajo los lineamientos establecidos en el marco aplicable.

Es procedente citar, por analogía, las siguientes jurisprudencias emitidas por nuestro Más Alto Tribunal, que presentan los siguientes datos de localización, rubro y texto:

"Novena Época
"Registro digital: 179849
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XX, diciembre de 2004
"Materia(s): Administrativa
"Tesis: 2a./J. 187/2004
"Página: 423

"NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. PARA SU VALIDEZ NO ES NECESARIO QUE LOS NOTIFICADORES SE IDENTIFIQUEN ANTE LA PERSONA CON QUIEN VAN A ENTENDER LA DILIGENCIA RELATIVA.—Los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación establecen la forma en que deben practicarse las notificaciones; sin embargo, ninguno de ellos señala que la persona que lleve a cabo la diligencia deba identificarse ante el notificado, pues la notificación no constituye una resolución administrativa, sino la comunicación de ésta, por lo que no tiene contenido particular, sino que transmite el del acto que la antecede, además de que constituye la actuación que complementa una decisión de la autoridad administrativa. Ahora bien, en el procedimiento administrativo en materia fiscal es necesario que los actos de autoridad sean notificados a las partes, pues ello constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración tributaria; sin embargo, el hecho de que el notificador no se identifique ante la persona con quien entienda la diligencia, no implica que tal actuación carezca de validez, si la formalidad esencial del procedimiento de comunicar a los particulares las decisiones de la autoridad administrativa consiste en hacerlas de su conocimiento. Lo anterior es así, porque lo que resulta trascendente es la observancia de una serie de requisitos para garantizar tal conocimiento, pero no así de la persona del notificador, quien aunque figura como el ejecutor del acto de autoridad, juega un papel secundario en la finalidad de éste; de ahí que su identificación constituya una formalidad accidental, pues lo que tiene relevancia es su actuación. En consecuencia, basta con que se mencione que la diligencia de notificación fue realizada por la persona señalada para ese efecto, para que aquélla tenga validez."

"Novena Época
"Registro digital: 163172
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XXXIII, enero de 2011
"Materia(s): Común
"Tesis: P./J. 115/2010
"Página: 5

"DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER

MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.—Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."

"Novena Época
"Registro digital: 186084
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XVI, septiembre de 2002
"Materia(s): Común
"Tesis: 1a./J. 42/2002
"Página: 5

"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa."

En esa tesitura, es válido afirmar que la oportunidad en la presentación de un medio de defensa como es el juicio contencioso administrativo federal, cuando el actor tiene conocimiento completo del acto de autoridad, depende de la data en que adquirió dicho conocimiento, la cual puede o no coincidir con aquella en que la autoridad culminó el procedimiento previsto en la norma para materializar su notificación a través de los medios establecidos para ello.

Ya delimitado en la presente ejecutoria que el escrito de demanda del juicio de nulidad sí presenta las omisiones que justifican la legalidad del requerimiento emitido, en el sentido de exhibir la constancia de notificación del acto impugnado o ante la falta de ésta, expresar la fecha de conocimiento del acto, resta establecer si el entonces actor dio cumplimiento al requerimiento que se le llevó a cabo.

Al presentar el escrito de cumplimiento al requerimiento emitido por el Magistrado instructor, el ahora quejoso expresó:

"**********, con la personalidad que debidamente tengo acreditada en autos del expediente al rubro citado, ante usted, con el debido respeto com-

parezco para exponer.—Que por medio del presente ocurso y para todos los efectos legales a que haya lugar, vengo a desahogar la vista ordenada por su Señoría por auto de 15 de mayo de 2014, ello en los siguientes términos: En cumplimiento al auto por el que se desahoga la vista, exhibo y acompaño la siguiente documentación: 1. Exhibo y acompaño una copia más de la demanda y anexos para el correspondiente traslado a la demandada y copia del presente ocurso.—2. Constancia de notificación de la resolución impugnada.—Por cuanto a la notificación, ello se dio de la forma que la misma resolución señala en su cuarto resolutivo, que a la letra reza: (lo transcribe).—De lo anterior es claro que la notificación me surte efectos a partir del día siguiente en que se surte la notificación por esa vía, se explica: En razón a que no fue posible la notificación personal, ésta parte de la resolución, en cumplimiento al Acuerdo por el que se reforman los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de noviembre de 2013, a través de la sección de avisos de la delegación federal en razón de que no fue posible llevar a cabo la notificación de manera personal, quedó por un término de diez días en dicha sección y finalmente certificando dicho acto es que se surte la notificación, de ahí que será una vez que la demandada dé contestación a la demanda, que se tomará conocimiento de la certificación aludida y, con ello, la certificación del término para la interposición de la demanda, dando con ello cumplimiento a la prevención en este tópico.—Por lo anteriormente expuesto, a usted Magistrado instructor, atentamente pido: Único. Tenerme desahogando la prevención ordenada en autos, dando trámite a la demanda propuesta y sustanciado el procedimiento, declarar la nulidad de la resolución impugnada."

En el ocurso en cita hizo alusión al requerimiento relativo a la constancia de notificación del acto impugnado, de lo que se remitió al contenido de la propia resolución para referir que ésta se practicó a través de la sección de avisos de la autoridad delegacional demandada, por lo que sería hasta que ésta formulara su contestación que se tomaría conocimiento de la certificación de la publicación y retiro del acto en los citados avisos, para con ello cumplir la prevención que se le emitió.

En el auto de cuatro de junio de dos mil catorce se proveyó al respecto:

"Visto el contenido del escrito presentado en la oficialía de partes de esta Sala, el dos de los corrientes, mediante el cual **********, por su propio derecho, pretende dar cumplimiento al requerimiento contenido en el proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce, quien exhibe al efecto una copia adicional del escrito de demanda y sus anexos; asimismo, realiza diversas manifestaciones en relación con la notificación de la resolución impug-

nada.—Visto el escrito de cuenta y su anexo, se advierte que el promovente fue omiso en señalar la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, no obstante que le fue expresamente requerida en el inciso 2) del referido auto de diecinueve de mayo. Lo anterior es así, toda vez que si bien el ocursante manifiesta que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 Bis, fracción IV, del Acuerdo por el que se reforman los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, la resolución impugnada fue publicada en la sección de avisos de la autoridad emisora, dicha información es insuficiente para satisfacer cabalmente el requisito formal a que alude el artículo 15, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que finalmente no se informa la data precisa en que tuvo conocimiento del acto combatido; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, fracciones I, VII y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con el diverso 15, fracciones V y VI, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tiene por no cumplimentado el requerimiento hecho en el inciso 2) antes indicado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de diecinueve de mayo de dos mil catorce, por lo que **se tiene por no presentada la demanda**.—No es óbice a lo anterior el hecho de que el promovente sostenga que una vez que la demandada formule su contestación respectiva se tendrá conocimiento de la fecha en que se hizo la certificación de notificación de la resolución impugnada y, con ello, la certeza del término para la presentación de la demanda, dado que así no se da cumplimiento a la prevención de trato, pues dicha circunstancia no la exime de la carga procesal de manifestar la fecha en que tuvo conocimiento del acto combatido. De considerar lo contrario daría lugar a admitir una demanda que no reúne uno de los requisitos esenciales establecidos por la ley para ese efecto y vinculado estrechamente con la oportunidad en su presentación."[9]

El Magistrado instructor tuvo por no cumplimentado el requerimiento, esencialmente, porque el ahora quejoso no exhibió la constancia de notificación ni precisó la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado.

El acto reclamado se sustenta en los siguientes motivos y fundamentos:

"Precisado lo anterior, los suscritos Magistrados consideran **infundados** los agravios de la recurrente, de acuerdo con lo siguiente.—En efecto, en los casos en los que previo a la admisión de la demanda el juzgador formule un requerimiento a efecto de aclarar la misma, o bien exhibir correctamente

[9] Foja 28 del juicio de nulidad.

los anexos de ésta, con los que pretende demostrar los extremos de su acción, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, entonces es indiscutible que si el accionante no cumple el requerimiento aludido a cabalidad, el Magistrado instructor estará en posibilidad de hacer efectivo el apercibimiento de mérito, de conformidad con lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.—Para evidenciar tal afirmación resulta necesario analizar el contenido del artículo 15, fracciones V y VI, en relación con el penúltimo párrafo, de la citada ley, que establece: 'Artículo 15. (se transcribe).'.—Del precepto legal que antecede se advierten los documentos que deberán de ser adjuntados a la demanda de nulidad, los cuales están contenidos en sus nueve fracciones, y de acuerdo con el penúltimo párrafo, si no se anexan deben requerirse al promovente para que los presente en el plazo de cinco días.—Cabe referir que si el actor no anexa alguno de los documentos, o bien, no aclara su demanda respecto de algunos de los que se hace referencia en las fracciones I a VI del artículo 15 antes citado, la consecuencia es tener **por no presentada la demanda**; lo anterior es diferente a no exhibir alguno de los que se señalan en las fracciones VII a IX de ese dispositivo legal, pues la consecuencia sería **tener por no ofrecidas tales probanzas**.—Así las cosas, la razón por la que la omisión de acompañar los documentos previstos en las fracciones I a VI del artículo 15 antes citado tiene una consecuencia más severa, es porque no se trata de cualquier información, sino de la necesaria para la tramitación del juicio por constituir elementos esenciales y sustanciales sin los cuales no podría desarrollarse normalmente el juicio, sin afectar las defensas de la enjuiciada por no poder conocer todos los hechos de la demanda y los conceptos de anulación, tales como si el promovente tiene facultades para instaurar el juicio, cuál es el acto impugnado, o bien, la fecha de su notificación, a efecto de verificar la oportunidad de la demanda.—Asimismo, cabe precisar que si bien el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece una serie de documentos que se deben anexar a la demanda, lo cierto es que tal precepto no debe interpretarse de una forma limitada, ya que en los casos en que el Magistrado instructor observe que el escrito de demanda es oscuro o irregular, puede prevenir al promovente para que lo aclare, de conformidad con lo que establece el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con el aludido numeral 15.—Es así, pues resulta jurídicamente válido que cuando del escrito de demanda no se advierta con claridad la fecha en que el actor tuvo conocimiento del contenido de la resolución impugnada, por sustentar que no cuenta con las constancias de notificación, que el Magistrado instructor le requiera que señale la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, ello a efecto de determinar la oportunidad en la presentación de la demanda, lo que incluso se contempla como

una obligación a cargo del demandante en el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.—Lo anterior es así, ya que el contenido de la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no debe interpretarse de forma literal, en cuanto a que no prevé que se señale la fecha en que el actor tuvo conocimiento del contenido de la resolución impugnada, sino la fecha en que fue notificado, ya que atendiendo a lo tutelado en ese precepto legal, en el sentido de que el demandante se allegue al juicio de todas las documentales, así como de conocer los hechos que acontecieron en la especie, los cuales se estiman indispensables para la resolución del negocio y que permitan a la contraparte realizar una debida defensa.—Por tanto, con fundamento en lo que establece la fracción VI del artículo 15 y I del 16, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la aludida ley adjetiva, se considera válido que pueda prevenirse al actor para que, en los casos en los que sustente que no recibió constancia de notificación, señale la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, a fin de determinar la oportunidad en la presentación de la demanda y realizar el cómputo correspondiente, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a ese requerimiento se tendrá por no interpuesta.—Es ilustrativa, **por compartir el criterio que informa**, así como por identidad de razón, la tesis VII-TASR-NOIII-5, emitida por la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en la página 474 de la Séptima Época, Año II, ejemplar 7, de febrero de dos mil doce, de la revista del tribunal, que es del rubro y texto siguientes: 'ESCRITO DE DEMANDA INCOMPLETO. PROCEDE REQUERIMIENTO DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR AL PROMOVENTE PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 325 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA. (se transcribe).'.—En la especie, del contenido de las constancias que obran agregadas a los autos, las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo que establece el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil catorce, **********, por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce, emitida por el **********, mediante el cual se hizo efectiva la garantía consistente en el billete de depósito número **********, por la cantidad de $********** (**********), y se ordenó remitir dicho billete a la Tesorería de la Federación para la aplicación de su importe a la cuenta que tiene en el Banco de México.—Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce se requirió al promovente para que en el plazo de cinco días hábiles

contados a partir del día hábil siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído exhibiera: a) una copia adicional del escrito de demanda y sus anexos; b) informara la fecha en la que tuvo conocimiento de la misma (se practicó); ello, bajo el apercibimiento, en caso de incumplimiento, **de tener por no presentada la demanda, de conformidad con lo que establece el artículo 15, fracciones I, V y VI, así como su penúltimo párrafo, en relación con el numeral 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo**.—Luego, mediante escrito presentado el treinta de mayo del año en curso, la parte actora pretendió dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos, por lo que hace a la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución impugnada y, al respecto, manifestó (foja 15 de autos): 'a) Constancia de notificación de la resolución impugnada. (se transcribe).'.—En relación con el escrito antes aludido, mediante proveído de cuatro de junio de dos mil catorce, el Magistrado instructor consideró que, en el caso, no se dio cumplimiento al requerimiento formulado en el diverso auto de diecinueve de mayo de dos mi catorce, por considerar lo siguiente: '(se transcribe).'.—Del contenido del acuerdo que antecede se advierte que la consideración sustancial para determinar que, en el caso, no se había dado cabal cumplimiento con el requerimiento formulado en el proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce, lo fue que aun cuando el actor manifestó que atento al artículo 8 Bis, fracción IV, del Acuerdo por el que se reforman los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, la resolución impugnada fue publicada en la sección de avisos de la autoridad emisora, esa información resultó insuficiente para satisfacer el requisito formal a que alude la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 16, fracción I, de esa ley ya que, finalmente, no se informó la fecha exacta en que el accionante tuvo conocimiento del acto combatido; de ahí que se hiciera efectivo el apercibimiento y se tuviera por no interpuesta la demanda.—Precisado lo anterior, como se adelantó en párrafos precedentes, a criterio de los Magistrados integrantes de esta Sala, se considera que no asiste razón al inconforme.—Es así, porque en el caso fue correcto que el Magistrado instructor considerara que el actor no dio cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en términos de lo que establece el artículo 15, fracciones I y VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 16, fracción I, de esa ley, ya que en el caso se le solicitó que precisara la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, pues la demanda no era clara.—Sin embargo, el accionante en vez de circunscribirse a precisar la fecha exacta en que tuvo conocimiento de la resolución impugnada, insistió en que el acto impugnado no le había sido notificado personalmente porque fue publicado en la sección de avisos de la autoridad emisora y que, en todo caso, esta última es la que contaba con esa fecha de notificación y, por tanto, hasta que

ésta formulara su respectiva contestación se sabría la fecha solicitada.—Como se ve, el hoy recurrente no cumplió a cabalidad con el requerimiento que le fue formulado, que era señalar la fecha en que había tenido conocimiento de la resolución impugnada, dato esencial **para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda**, lo cual no se trata de cualquier información, sino de lo necesario para determinar la procedencia del juicio, que constituye un elemento sin el cual no podría desarrollarse normalmente el juicio, sin afectar las defensas de la enjuiciada por no poder conocer todos los hechos de la demanda; lo anterior, con sustento en lo que establecen los artículos 15, fracción VI y 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.—Por tanto, si en el caso no se aportó tal información, fue válido que el Magistrado instructor hiciera efectivo el apercibimiento decretado en el diverso proveído de diecinueve de mayo de dos mil catorce; esto es, que se tuviera por no presentada la demanda en términos del penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; de ahí lo infundado de los argumentos del accionante.—Asimismo, cabe referir que la consideración alcanzada no se considera contraria a lo que establece el artículo 14 constitucional, en cuanto a la garantía de audiencia, ni en lo referente a que no se privilegió el derecho humano de tutela judicial efectiva.—Así las cosas, devienen **infundados** los planteamientos que formula el recurrente en vía de agravios en ese sentido, dado que si bien, con motivo de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se exige la protección más amplia de los derechos humanos de los gobernados, también es verídico que es insuficiente que se invoque como argumento la inobservancia al principio **pro persona** para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio, o bien, que con dicha manifestación se pueda demostrar la violación a un derecho fundamental.—A fin de evidenciar lo anterior es preciso traer a colación, de manera muy puntual, los aspectos más destacados respecto a la reforma en cuestión.—De inicio, es oportuno destacar que, con motivo de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todos los órganos jurisdiccionales nacionales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben acatar el principio 'pro persona', consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, es decir, ejercer el control de convencionalidad de las normas, atendiendo no sólo a los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna, sino también a los contenidos en los tratados internacionales que la Nación tenga suscritos en materia de derechos humanos.—Además, con dicha reforma se prevé que todos los juzgadores ejerzan dicho control de convencionalidad *ex officio* del orden jurídico, confor-

me al cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.—Ilustra lo anterior, la tesis aislada P. LXVII/2011, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: 'CONTROL DE CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. (se transcribe).'.—Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que la aplicación de dicha reforma por parte de los órganos jurisdiccionales, no implica que dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que el cambio conlleva observar los instrumentos internacionales que existen y, de advertir una protección más benéfica para la persona, aplicarla.—El criterio al que se hace referencia es la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), que dice: 'PRINCIPIO PRO PERSONA O *PRO HOMINE*. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. (se transcribe).'.—Asimismo, la Primera Sala del Máximo Tribunal de Nuestro País, en relación con el principio pro persona contenido en el artículo 1o. constitucional, ha señalado que la aplicación de ese principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de nulidad; es decir, **la obligación constitucional de otorgar la protección más amplia a la persona humana no puede ser invocada como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, como es lo relativo a la oportunidad de la demanda**.—El criterio al que se hace mención es la tesis aislada 2a. LXXXII/2012, que sirve para ilustrar, **por analogía**, el caso en concreto y dice: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. (se transcribe).'.—En ese contexto, resulta incorrecto el sentir de la recurrente, pues si bien es cierto que con motivo de la reforma a la Constitución es obligación de todas las autoridades jurisdiccionales buscar la protección más benéfica de los derechos humanos, también lo es que dicha interpretación del principio pro persona constituye una herramienta para lograr la efectiva protección de los gobernados, siempre y cuando exista un derecho humano que haya sido vulnerado.—Es decir, es insuficiente que se invoque como argumento para controvertir el auto impugnado la existencia de una transgresión a un derecho humano, manifestando que no se observó el principio pro persona o se omitió llevar a cabo una interpretación conforme, pues es necesario que se otorguen

los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de nulidad, tales como contar con todos los elementos necesarios para determinar la procedencia del juicio, tal como aconteció en la especie, que ante la falta de notificación personal argumentada por el actor, resultaba elemental contar con la fecha en que se tuvo conocimiento de la resolución impugnada, para poder determinar la oportunidad en la presentación de la demanda; de ahí que no le asista razón al recurrente. …"

En esencia, es objetivamente correcta la determinación emitida por la Sala responsable, ya que en la presente ejecutoria se ha establecido que las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, especialmente su artículo 15, fracciones V y VI, son precisas al establecer cómo se procederá en lo que atañe a la comunicación al juzgador sobre la fecha de notificación del acto impugnado, ya que en caso de contar con la constancia respectiva, ésta debe exhibirse y, en caso de no contar con ella, debe especificarse así en la demanda y, paralelo a ello, externar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto, todo lo anterior, sin detrimento de que si se estima que la notificación es ilegal, puedan plantearse los respectivos conceptos de impugnación en la demanda.

No se soslaya el hecho de que no puede obligarse al justiciable al cumplimiento de un imposible, como sería el caso de constreñirlo a la exhibición de la constancia de notificación si carece de ella; no obstante, se pondera que tanto el legislador como el propio Magistrado instructor al emitir el requerimiento respectivo, salvaron dicha cuestión al requerir, ya sea la exhibición de la constancia de notificación, o bien, señalar la fecha de conocimiento del acto impugnado que se acompañó como anexo al escrito de demanda.

Sobre dicha base, si atendiendo a la causa de pedir expresada en forma conjunta entre el escrito inicial de demanda y el escrito de cumplimiento a la prevención que se realizó al ahora quejoso, se puede asumir que alega no contar con la constancia de notificación del acto impugnado al haberse llevado a cabo a través de la sección de avisos de la autoridad señalada como demandada, con ello se descarta la primera hipótesis que conforma el requerimiento, inherente a la exhibición de la constancia de notificación, pero precisamente por exclusión de ésta, debía cumplirse con lo exigido en el sentido de precisar la fecha de conocimiento del acto impugnado, lo cual no fue satisfecho en el caso.

Se retoma el razonamiento antes expresado, en el sentido de que el punto toral de partida para establecer la oportunidad en la presentación de un medio de defensa como es el juicio contencioso administrativo, que pre-

senta las características del caso que nos ocupa, lo constituye la fecha de conocimiento del acto de autoridad por parte del justiciable, la cual, como se dijo, puede o no coincidir con la que obre en la constancia de notificación que tenga en su poder la autoridad, toda vez que se parte de la base de que tuvo conocimiento completo del acto al exhibirlo como anexo al escrito de demanda.

Igualmente, se ha puntualizado que es el cumplimiento de las formalidades precisadas en el artículo 15, fracción V y VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una carga procesal que corresponde al actor y no puede ser delegada ni al juzgador ni a su contraria en el juicio, máxime si se pondera como premisa fundamental, que al obrar en poder del justiciable el propio acto reclamado, con independencia de la forma en que lo obtuvo, es la propia persona quien de origen tiene conciencia de la data en que esto ocurrió y que no existe razón lógica que permita justificar que no proporcione dicha información al juzgador, máxime cuando la propia norma así lo exige y fue requerido en esos términos.

Con independencia de que la parte contraria está en legal aptitud de solicitar el sobreseimiento del juicio en caso de que resulte extemporáneo en cuanto a su presentación y se pruebe la efectiva fecha de notificación del acto, ya que incluso el análisis de la procedencia del juicio constituye una cuestión de orden público que debe ser analizada por el juzgador aun de oficio,[10] ello no releva al justiciable de la obligación de comunicar al resolutor la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, en caso de que alegue no contar con la constancia de notificación respectiva.

No resulta óbice a lo anterior que el quejoso aduzca que la Sala responsable omitió tomar en consideración argumentos tales como que no contaba con la constancia de notificación por haberse practicado mediante la sección de avisos y que sería hasta que la autoridad quien aportaría la constancia respectiva para establecer la forma y términos en que se llevó a cabo la notificación, entre otras cuestiones, ya que contrario a su dicho, sí existe pronunciamiento al respecto por parte de la Sala responsable, así como de este tribunal, donde se destaca que este órgano colegiado ha llegado a la conclusión de que, al margen de que la persona pudiera no contar con la constancia de notificación, ello no la eximía de precisar la fecha en que conoció la resolución impugnada que acompañó al escrito de demanda, sobre lo cual, esencialmente, fue afín la autoridad responsable.

[10] Foja 12 del juicio de nulidad.

En ese orden, tampoco asiste razón al quejoso al manifestar que bajo la aplicación del principio pro persona, debió admitirse a trámite la demanda al privilegiar la protección más amplia en su favor, lo anterior es así, ya que el acceso a la justicia, si bien se erige como un derecho fundamental para la persona, su acceso es limitado, por lo que si no se cumplen las condicionantes establecidas por el legislador para tales efectos, no será procedente el medio de defensa que se promueva, sin que pueda fungir como sustento la aplicación del principio pro persona en los términos que alude el ocursante, en el entendido de que ello no conlleva que indefectiblemente deba fallarse en todos los casos en forma favorable a lo pretendido, menos aún cuando tal cuestión se contrapone al propio marco que rige la cuestión de trato.

Es procedente citar la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Décima Época
"Registro digital: 2004748
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.)
"Página: 906

"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES.—Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: 'PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.', reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del orde-

namiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio *pro homine* o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 'derechos' alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes."

Este tribunal externa su afinidad con el criterio esencial contenido en la siguiente jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito:

"Décima Época
"Registro digital: 2004823
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013
"Materia(s): Constitucional, Común
"Tesis: XI.1o.A.T. J/1 (10a.)
"Página: 699

"ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.—Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio *pro personae* (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, *inter alia*, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho

a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo."

De tal forma, si el propio quejoso es insistente al manifestar que tanto el procedimiento relativo al acto impugnado, como su propia notificación son ilegales y que no obra en su poder la constancia de notificación, en congruencia con lo establecido por los artículos 15, fracción VI y 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde incluso invoca este último en su favor, debió precisar la fecha de conocimiento del acto de autoridad, lo que no llevó a cabo ni en el escrito inicial ni al pretender cumplimentar el requerimiento que para ello se le formuló.

Conceptos de violación tercero y cuarto.

Inconstitucionalidad del artículo 15, fracción VI y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Sostiene el quejoso que desde que interpuso el recurso de reclamación adujo que el artículo referido en el párrafo que antecede contraviene la

garantía prevista por el artículo 14 de nuestra Carta Magna, al violar las formalidades esenciales del procedimiento, así como el acceso a la impartición de justicia que regula su diverso numeral 17, bajo el cual debe permitirse al justiciable acceder a los tribunales para plantear su pretensión a través de un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades.

Estima que la consecuencia establecida por la norma en caso de no exhibir la constancia de notificación o indicar la fecha de conocimiento del acto impugnado, resulta desmedida y afecta su derecho al acceso a la impartición de justicia, ya que destaca que las autoridades tienen en su poder las constancias relativas a los actos que emiten y a su notificación, por lo que están en posibilidad de probar tales hechos en el juicio en el momento procesal oportuno, destacando que, incluso, es el demandado quien cuenta con los mayores elementos para demostrar la existencia y términos del acto de autoridad y de su notificación.

Reitera su apreciación de que resulta desmedido el hecho de que la omisión de una formalidad traiga como consecuencia tener por no presentada la demanda.

Son **infundados** los conceptos de violación que se analizan.

El artículo 14 de nuestra Carta Magna, en su parte conducente, dispone:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. …"

El artículo en cita prevé que previo a la materialización de un acto privativo para la persona, en lo que atañe a su libertad, propiedad, posesiones o derechos, debe otorgársele la posibilidad de defensa previa donde se cumplan las formalidades que brinden el mínimo de certeza para afirmar que se salvaguardó la garantía de audiencia de la persona.

Así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época
"Registro digital: 200234
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: II, diciembre de 1995
"Materia(s): Constitucional, Común
"Tesis: P./J. 47/95
"Página: 133

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.—La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

La parte conducente del artículo 17 constitucional es del texto siguiente:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. …"

En este numeral se garantiza en favor de la persona el acceso efectivo a la justicia, que se erige como un derecho fundamental bajo el cual se regula la posibilidad de ser parte dentro de un proceso, donde cumplidos los respectivos requisitos procesales, se obtenga una resolución que dirima el conflicto

de intereses en que participó el justiciable, con la salvedad de que se delega al legislador la facultad de establecer los plazos y términos en que podrá ejercerse dicho derecho fundamental.

Por la utilidad para el asunto que nos ocupa, es importante delimitar que si bien puede darse el caso de afectación al derecho de acceso a la tutela judicial, mediante normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores a ella, que resulten innecesarios, excesivos y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, resulta que no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, especialmente tratándose de aquellos que, respetando ese derecho, realizan un ejercicio de ponderación para preservar otros derechos o, incluso, bienes o intereses constitucionalmente protegidos.

Por su utilidad, es pertinente citar las siguientes jurisprudencias, emitidas por nuestro Máximo Tribunal, de las que se destaca que las últimas dos fueron citadas por el quejoso en la demanda de amparo:

"Novena Época
"Registro digital: 171257
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XXVI, octubre de 2007
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: 2a./J. 192/2007
"Página: 209

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.—La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplica-

ción de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."

"Novena Época
"Registro digital: 188804
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XIV, septiembre de 2001
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: P./J. 113/2001
"Página: 5

"JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.—De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la

justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da."

"Novena Época
"Registro digital: 172759
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XXV, abril de 2007
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: 1a./J. 42/2007
"Página: 124

"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.—La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos –desembarazados, libres de todo estorbo– para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público –en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial– no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos

los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."

El artículo 15, fracciones V, VI y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece:

"Artículo 15. El demandante deberá adjuntar a su demanda:

"...

"V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

"VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.

"...

"Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas. ..."

El numeral en cita prevé que la omisión de requisitos tales como no exhibir la constancia de notificación del acto impugnado, o bien, señalar la fecha en que se conoció cuando no se haya recibido tal constancia o se haya practicado por correo, tiene como consecuencia inicial que el Magistrado instructor emita un requerimiento al promovente y le otorgue el plazo de cinco días para cumplimentarlo y, en caso de no subsanar la deficiencia respectiva, se tendrá como consecuencia final tener por no presentada la demanda.

A lo largo de la presente ejecutoria se ha establecido la importancia que guarda para el juzgador la manifestación, por parte del justiciable, de la fecha en que tuvo conocimiento del acto que impugna y exhibe en el escrito de demanda, en el entendido de que es precisamente a partir del conocimiento del acto que está en aptitud de acudir al medio de defensa que estime pertinente para defender lo que a su interés convenga.

También se ha puntualizado que la fecha de conocimiento del acto puede o no coincidir con aquella que obre en la constancia de notificación con que cuente la autoridad emisora de la resolución respectiva; de ahí que ante el conocimiento del acto por parte de la persona, al exhibirlo como anexo al escrito de demanda y expresar los argumentos de impugnación contra sus motivos y fundamentos, el legislador establezca la carga procesal para el promovente, en el sentido de que si obra en su poder la constancia de notificación la exhiba junto con su escrito de demanda o, en su defecto, si no cuenta con ella, debe precisarlo así y manifestar la fecha en que tuvo conocimiento del acto.

También se pondera que en caso de omisión en el cumplimiento de tales requisitos formales del escrito de demanda, el legislador no aplicó una consecuencia inmediata categórica que impida al justiciable acceder el juicio contencioso administrativo federal, ya que estableció la obligación al Magistrado instructor para emitir una prevención al promovente, así como un plazo razonable para subsanar el yerro incurrido.

Al respecto, debe puntualizarse que, en aras de salvaguardar el efectivo acceso a la impartición de justicia, el legislador previó la posibilidad tanto de que el justiciable cuente con la constancia de notificación del acto de autoridad como de que carezca de ella y, a su vez, estableció situaciones congruentes para cada caso al momento de cumplimentar el requerimiento respectivo, ya que de contar con la constancia de notificación el promovente habrá de exhibirla y, en caso de que esto no sea así, previa aclaración al respecto, deberá expresar la fecha en que tuvo conocimiento del acto.

Con lo expresado en el párrafo anterior puede vislumbrarse que no se conmina a la persona al cumplimiento de cuestiones que escapan de los parámetros mínimos de razonabilidad, ya que si obra en su poder la constancia de notificación, no existirá impedimento alguno para que la aporte al juicio, y si no cuenta con ella, no se le obliga a un imposible, sino sólo se le exige que haga la respectiva aclaración y comunique al juzgador la fecha en que conoció el acto, lo cual brindará al requirente el mínimo de información para constatar, al menos de forma preliminar, la oportunidad en la presentación de la demanda.

A consideración de este tribunal, el estudio de la constitucionalidad del precepto cuestionado por el quejoso no debe acotarse a la perspectiva de que se trata de requisitos meramente formales que debe cumplir el escrito de demanda; por el contrario, sin soslayar tal cuestión, el estudio debe trascender al fondo de dicho requisito, que en el caso cobra la mayor importancia, como es la oportunidad en la presentación del medio de defensa.

En efecto, si bien se reconoce el derecho de toda persona al acceso a la impartición de justicia, ello no implica que, indefectiblemente, deba recibirse de conformidad toda petición que en tal sentido se formule, máxime si ésta no se sujeta a las formalidades del procedimiento establecidas por el legislador que, entre otras cuestiones, buscan establecer un equilibrio entre el acceso a la justicia y la seguridad jurídica para las personas, ya que al fijar un plazo para la oportunidad del medio de defensa, se brinda el parámetro de certeza objetiva para los justiciables, del lapso temporal con que cuentan para excitar al órgano jurisdiccional, para que dirima un conflicto en que pueden verse inmersos sus intereses.

Siendo así, se justifica la razonabilidad del requisito de que ante la falta de constancia de notificación en poder del actor, éste debe aclararlo y expresar la fecha en que conoció el acto.

En lo que atañe a la consecuencia prevista por el legislador para el caso de no cumplir con la exigencia antes establecida, se concluye que no resulta contraria a la garantía de acceso a la justicia ni a la diversa de audiencia para el justiciable, toda vez que, en principio, no se dispone una consecuencia inmediata que impida la consecución del medio de defensa, ya que como se indicó, ante la omisión en el cumplimiento del requisito formal debe mediar requerimiento por parte del Magistrado instructor, donde precise el yerro incurrido y lo que se requiere para subsanarlo, además de que el justiciable contará con un plazo de cinco días hábiles para ello.

No se omite establecer que, incluso, el legislador privilegió la implementación de los medios necesarios para que el justiciable pueda subsanar la deficiencia incurrida en el escrito de demanda, al regular que la notificación de la prevención que se emita en casos como el que se analiza, debe llevarse a cabo en forma personal o mediante correo certificado con acuse de recibo.[11]

---

[11] "Artículo 67. Una vez que los particulares se apersonen en el juicio, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, en el que se les harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguientes resoluciones: … III. El requerimiento o prevención a que se refieren los artículos 14, 15, 17 y 21 de esta ley a la persona que deba cumplirlo, y …"

Por cuanto hace a la consecuencia aplicable para el caso de no cumplimentar lo requerido, el legislador estableció que será tener por no presentada la demanda, la cual este tribunal no considera desmedida, si se parte de la base de que la omisión incurrida, si bien es atinente a un requisito formal, tiene el trasfondo de tratarse de la comunicación de la información mínima al juzgador, para establecer en un primer plano la oportunidad en la presentación de la demanda, aunado a que la consecuencia en caso de incumplimiento no prejuzga en forma determinante sobre dicha cuestión.

En efecto, al no proporcionar el justiciable al Magistrado instructor la constancia de notificación del acto (en caso de contar con ella) ni comunicarle la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que no sólo impugna, sino que, incluso, puede darse el caso, como en la especie, que se exhibe como prueba en el juicio, resulta inconcuso que se priva al juzgador de los mínimos elementos de certeza objetiva para descartar que se promueve un juicio contra un acto que pudiera considerarse consentido, en términos del artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.[12]

Se pondera el hecho de que la determinación de tener por no presentada la demanda no genera una situación que prejuzgue sobre la oportunidad de la misma, como sí ocurriría al desecharla por extemporánea que, de quedar firme, impediría al justiciable intentar en otro momento la promoción del medio de defensa.

Por el contrario, el pronunciamiento de tener por no presentada la demanda no impide al justiciable intentar nuevamente la promoción de la acción respectiva, cumpliendo, desde luego, con los requisitos de ley, máxime que tal como se ha indicado, esa consecuencia no deriva de una actuación aislada o arbitraria del juzgador, sino que proviene de la omisión incurrida por la persona en el cumplimiento de un requisito que si bien es formal, es de esencial importancia para constatar la oportunidad en la presentación de la demanda y, no sólo eso, sino que previo a ello medió un requerimiento expreso por parte del juzgador, delimitando el yerro incurrido y cómo debía subsanarse, para lo cual se le confiere un plazo razonable a la persona.

---

[12] "Artículo 8o. Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: … IV. Cuando hubiere consentimiento, entendiéndose que hay consentimiento si no se promovió algún medio de defensa en los términos de las leyes respectivas o juicio ante el tribunal, en los plazos que señala esta ley.—Se entiende que no hubo consentimiento cuando una resolución administrativa o parte de ella no impugnada, cuando derive o sea consecuencia de aquella otra que haya sido expresamente impugnada. …"

Si informado el justiciable de la omisión incurrida, lo que habría de hacerse para subsanarla y conferido el plazo de ley para ello, no cumple lo requerido, sin importar las razones que haya tenido para ello, se apega al marco constitucional que se aplique la consecuencia consistente en tener por no presentada la demanda.

No se soslaya el hecho de que atento al principio de equidad procesal, la autoridad tiene la oportunidad de formular una contestación a la demanda donde puede hacer valer lo que a su interés convenga, incluso respecto de la oportunidad en la presentación de la misma, aunado a que la procedencia del juicio es una cuestión de orden público que debe ser analizada en forma oficiosa por el juzgador, en términos del artículo 8o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, si se parte de la base razonable de que en casos como el que nos ocupa el justiciable tiene en su poder el documento en que consta el acto impugnado, lo exhibe como prueba en el juicio y controvierte específicamente sus motivos y fundamentos, no se advierte sustento alguno para eximirlo de informar al juzgador la fecha en que conoció el acto, la cual, como se ha puntualizado a lo largo de la presente ejecutoria, puede coincidir o no con la data que obre en la constancia de notificación con que cuente la autoridad.

No puede calificarse de innecesario el cumplimiento de la formalidad de expresar en el escrito de demanda la fecha en que se conoció el acto de autoridad impugnado para el caso de no contar con la constancia de notificación, en el entendido de que con ello se fija la base objetiva inicial para constatar la oportunidad en la presentación de la demanda.

Tampoco se considera excesivo si se toma en consideración que al obrar en poder del justiciable la constancia del acto de autoridad, dicha adquisición debió ocurrir en un momento determinado, cuya certeza es del conocimiento de la propia persona que cuenta con él y, en tal medida, no existe impedimento alguno para que manifieste al juzgador la fecha en que conoció el acto, en el entendido de que no se le obliga a un imposible, como sería exhibir la constancia de notificación de la que carece, sino sólo a precisar que no cuenta con ella e indicar la fecha en que conoció el acto que obra en su poder.

La exigencia del marco legal guarda la debida razonabilidad, en el entendido de que si es el actor quien pretende promover el juicio contra un determinado acto que obra en su poder, debe corresponder a éste la carga

procesal de informar la fecha en que conoció el acto que exhibe como anexo a la demanda, sin detrimento de que en el devenir de la instrucción del juicio, la parte contraria pueda alegar lo que a su derecho convenga en relación con dicha cuestión.

En cuanto a la proporcionalidad entre la omisión y la consecuencia que estableció el legislador, se cumple satisfactoriamente, en el entendido de que no es dable asumir que en aras de privilegiar el acceso a tutela jurisdiccional, el juzgador se vea obligado a recibir, tramitar y resolver la integridad de los asuntos que se pongan en su conocimiento, cuando el marco legal establece criterios de oportunidad que, entre otras cuestiones, buscan salvaguardar la seguridad jurídica de quienes pueden ver inmersos sus intereses en el litigio, así como formalidades para constatar dicha oportunidad, como es, precisamente, indicar la fecha en que se conoció el acto, cuando no se cuente con la constancia de notificación.

En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, se retoma que el legislador no aplicó una consecuencia que impida de plano el acceso a la impartición de la justicia para la persona, en el entendido de que el juzgador inicialmente debe emitir una prevención, respetar el plazo que la norma confiere para subsanar el yerro incurrido y sólo en caso de no llevarlo a cabo la persona, se tendrá por no presentada la demanda que, se insiste, no prejuzga sobre su oportunidad sino que resulta una consecuencia razonable y proporcional a la omisión que en principio podría asumirse como involuntaria al presentar la demanda, pero posteriormente consciente al cumplimentar el requerimiento,[13] al no informar al Magistrado instructor la fecha en que conoció el acto, por lo que se le priva del mínimo de información para constatar en forma inicial la oportunidad en la presentación de la demanda.

Este tribunal reitera que no puede delegarse en el juzgador ni en la contraria la satisfacción de las cargas procesales que corresponden al accionante, menos aún asumir que la falta de señalamiento de la fecha de conocimiento se trata de una cuestión subsanable en el devenir de la instrucción del juicio, para lo cual, incluso, se estaría a expensas de que el enjuiciado efectivamente comparezca en tiempo y forma, aportando las constancias relativas que sustenten la data de conocimiento por parte del actor de la resolución respectiva, ya que de no hacerlo, se estaría ante la posibilidad de que se emita una resolución de fondo sobre la legalidad de un acto, que bien podría considerarse como consentido, por no promover oportunamente el medio de defensa respectivo.

---

[13] En el entendido de que para este momento ya medió un requerimiento donde el juzgador le indicó la omisión en que incurrió y lo que habría de informar para subsanarlo.

En esa tesitura, y ponderando la necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica de las partes, al impedir la posibilidad de que se tramiten y fallen asuntos sobre actos que debe considerarse consentidos por no promover el medio de defensa dentro del plazo establecido en la norma, para casos como el que nos ocupa, donde previo a la presentación de la demanda, ya obraba en poder del justiciable la constancia del acto de autoridad, resulta razonable que sea el propio promovente quien informe la fecha en que conoció el acto, de no contar con su constancia de notificación y, en caso de no informar tal cuestión, previa prevención que al efecto se le emita y transcurrido el plazo legal para subsanar dicha deficiencia, se tenga por no presentada la demanda; consecuencia que, se insiste, no prejuzga sobre la oportunidad de la demanda, sino que constituye una cuestión congruente y proporcional ante la imposibilidad de constatar la oportunidad en la presentación de la demanda, por omisión reiterada o renuencia por parte de la persona de informar al juzgador la fecha en que conoció el acto impugnado que exhibe y controvierte expresamente desde el escrito de demanda.

No se omite destacar que el pronunciamiento emitido por este tribunal, es congruente con los criterios de jurisprudencia emitidos por nuestro Más Alto Tribunal, que se han citado con antelación y que, incluso, dos de ellos fueron invocados por el quejoso en el escrito de demanda de amparo.

Como consecuencia de lo antes expresado, tampoco se actualiza una violación a la garantía de audiencia prevista por el numeral 14 de nuestra Carta Magna, vinculada con las debidas formalidades del procedimiento, en el entendido de que precisamente la regulación del juicio contencioso administrativo federal, en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece la obligación a cargo del justiciable de precisar en el escrito de demanda la fecha en que conoció el acto impugnado, en caso de no contar con la constancia de notificación y, para el supuesto de que se omita tal cuestión, el Magistrado instructor debe emitir una prevención al respecto, de la que el promovente contará con el plazo de cinco días para subsanarla y, en caso de no ser así, se tendrá por no presentada la demanda, siendo que en la especie fueron respetadas la integridad de dichas formalidades por parte de juzgador, donde se pone énfasis que previo a la consecuencia de tener por no presentada la demanda, medió una prevención en cuyo cumplimiento, la persona estuvo en legal aptitud de subsanar la deficiencia incurrida en su escrito de demanda.

Al no existir diversos conceptos de violación pendientes de estudio y resolución, además de que no se advierte supuesto alguno en que deba tener lugar la aplicación de la suplencia de la queja en favor del promovente, lo con-

ducente, en el caso, es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados.

En el mismo sentido se resolvieron los juicios de amparo ********** y **********, en la sesión de ocho de enero de dos mil quince.

Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 75, 170, 184, 186, 188 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión **no ampara ni protege a** **********, en contra del acto que reclamó de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Cancún, consistente en la sentencia interlocutoria de cinco de septiembre de dos mil catorce, en el juicio de nulidad **********.

Notifíquese como corresponda; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen, anótese en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Francisco Miguel Padilla Gómez, como presidente, Rafael Martín Ocampo Pizano y el secretario en funciones de Magistrado José Manuel Novelo López, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos

Nota: El primer rubro citado al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis XXVII.1o.A. (10a.), que aparece en la página 1717 de esta *Gaceta*.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA. El análisis de la legalidad –en el recurso de reclamación mencionado– del acuerdo que tiene por no presentada la demanda, cuando constituye la consecuencia de una prevención contenida en un

proveído anterior, no puede acotarse a los motivos y fundamentos que se expresan en aquél, sino que comprende a la propia resolución que le da origen y sustento, de lo contrario, se violaría el derecho de acceso a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acuerdo recurrido no constituye una cuestión diversa del ejercicio de ponderación del Magistrado instructor para verificar si se cumplió o no el requerimiento por él emitido, pues éste puede, incluso, carecer de sustento legal. Lo anterior se apoya, además, en que el acuerdo de prevención no es impugnable, por sí solo, vía el recurso referido, que constituye el medio de defensa ordinario para dirimir las cuestiones que se susciten en el devenir de la instrucción del juicio contencioso administrativo federal, y en que acorde con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto se reserva contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual excluye a las cuestiones meramente procesales, máxime que los medios de impugnación son creados por el legislador con la finalidad de otorgar a los justiciables elementos que faciliten la defensa de sus derechos, por lo que no deben ser tratados con un rigorismo que los convierta en trampas procesales que, en vez de facilitar, obstaculicen esa defensa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.1o. J/1 (10a.)

Amparo directo 528/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretario: Edgar Alan Paredes García.

Amparo directo 522/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

Amparo directo 534/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Karla Luz Eduwiges Luna Rodríguez.

Amparo directo 540/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

Amparo directo 565/2014. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN.

AMPARO EN REVISIÓN 143/2014. 12 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIO: SAMUEL RENÉ CRUZ TORRES.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Análisis de los agravios.

En una parte del único agravio, las recurrentes sostienen que, contrariamente a lo considerado por el a quo, la resolución reclamada, en la que desestimó la excepción de incompetencia por declinatoria, es un acto de imposible reparación, ya que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Es sustancialmente fundado el anterior motivo de inconformidad, atendiendo a su causa de pedir.[12]

Como lo sostienen las inconformes, la resolución en la que se desestima una excepción de incompetencia puede afectar derechos sustantivos, de modo que constituye un acto de imposible reparación impugnable mediante el amparo indirecto.

En efecto, el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

---

[12] Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 38.

"...

"VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."

De los citados preceptos se colige que el amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. A contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente.

En tal sentido, de conformidad con el nuevo canon y sistema interpretativo en materia de derechos humanos y con las directrices técnico jurídicas con las que se han instrumentado su defensa y protección a través del amparo, dadas mediante reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el seis y el diez de junio de dos mil once, este Tribunal Colegiado estima necesario redimensionar, para efectos del juicio de amparo, el tema de la competencia, para migrar su entendimiento y desarrollo dogmático jurisprudencial de un simple presupuesto procesal hacia una institución o derecho humano rector de todo acto de autoridad, sin el cual ninguna persona puede ser molestada ni privada del resto de sus derechos (libertad, propiedad, tránsito, educación, salud y vivienda).

Para ello, sin duda, debe partirse de la aproximación conceptual que el Constituyente ha precisado en relación con los derechos sustantivos en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ..."

El primer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, incorpora como materia de protección por parte del Estado a los derechos humanos reconocidos por la misma y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, entendiéndose por éstas todos los mecanismos, medios y procedimientos establecidos para lograr la efectiva salvaguarda de los derechos en cuestión.

Asimismo, el referido párrafo primero de la Constitución Federal pone de relieve que para el Constituyente Permanente los derechos y sus garantías no son lo mismo, y que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos.

Es aplicable a lo anterior la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 24 K (10a.), sustentada por este cuerpo colegiado en su anterior denominación, cuyos rubro y texto señalan:[13]

"DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN.—Antes de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las voces 'derechos humanos y sus garantías', eran términos que solían confundirse, ambigüedad que posiblemente derivaba de la anterior denominación del capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulado 'De las garantías individuales'. Sin embargo, el Poder Reformador de la Constitución, con las citadas reformas, elevó a rango constitucional su distinción, como deriva de las siguientes menciones: i) el capítulo I cambió su denominación a 'De los derechos humanos y sus garantías'; ii) en el artículo 1o. se especificó que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 'así como de las garantías para su protección', y iii) en el numeral 103, fracción I, se especificó que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite por infracción a los derechos humanos y las 'garantías otorgadas para su protección'. Luego, para el Constituyente Permanente los derechos y sus garantías no son lo mismo, ya que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos; constituyen, según Luigi Ferrajoli, los 'deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, según que los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos', es decir, son los requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en la Constitución y en los tratados, destinadas e impuestas principalmente a las autoridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; de ahí que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen; de tal suerte que pueden existir derechos sin garantías pero no garantías sin derechos. Así, a manera de ejemplo, puede decirse que el derecho humano a la propiedad tiene, entre otras garantías, la de audiencia y legalidad, pues prohíbe a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito en el que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que los gobernados sean privados de la propiedad sin previa audiencia."

---

[13] *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2353, registro digital: 2005681.

Con todo, aun cuando resulte válido hablar de una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen y aquéllos pueden existir sin éstos pero no a la inversa; en concepto de este órgano colegiado las citadas categorías (derechos humanos y sus garantías) engloban lo que el legislador ha identificado en la Ley de Amparo como derechos sustantivos.

Ello, en el entendido de que los derechos sustantivos a que se hace alusión en el artículo 107, fracción V, de la citada ley son aquellos derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como sus garantías,[14] siendo un requisito indispensable para estimarlos así que éstos puedan tener una infracción directa a través del acto de autoridad posiblemente transgresor del sistema protector de derechos fundamentales.

En consecuencia, los derechos sustantivos a que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo son la suma de los derechos humanos a que alude el artículo 1o. de la Carta Magna, que comprenden tanto los reconocidos en la propia Constitución como aquellos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, constituyendo junto con sus garantías un parámetro de control de regularidad constitucional.

Ahora bien, tomando como base la premisa antes obtenida, conviene analizar y remembrar el desarrollo dogmático jurisprudencial que ha tenido dicha institución otrora circunscrita al ámbito netamente procesal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración Plenaria o en sus Salas especializadas, ha precisado diversos casos (de excepción) bajo los cuales se justificaba un pronto análisis constitucional, cuando se reclamaba la falta de competencia de las autoridades jurisdiccionales en procesos contenciosos llevados ante autoridad jurisdiccional. Esto, en el entendido de que en ciertos casos se produciría una afectación a las partes en grado predominante o superior; esto es, se identifica como una violación adjetiva o procesal.

---

[14] Vid. P./J. 20/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.", sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, registro digital: 2006224.

Así, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal sostenía que la única razón para estudiar la cuestión de competencia en el amparo indirecto se presentaba cuando la aceptación de la competencia involucraba a órganos jurisdiccionales de distinto sistema jurídico, es decir, cuando el asunto pasaba de una Junta de Conciliación y Arbitraje al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o bien, a un tribunal administrativo, porque en ese caso ya no se aplicaría la Ley Federal del Trabajo.

La jurisprudencia que se comenta es la 2a./J. 19/99, de rubro:[15]

"COMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA FEDERAL O LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESA EXCEPCIÓN, SÓLO SE PUEDE IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO Y NO EN EL INDIRECTO.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número P./J. 24/92, visible en la página 11 del Tomo 56 correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, con el rubro: 'EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.', sostuvo que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se debe entender que son de 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, mas no cuando afectan derechos adjetivos. Por tanto, en aplicación de esa jurisprudencia debe considerarse que la resolución de una Junta de Conciliación y Arbitraje en la que sostiene su competencia para seguir conociendo del juicio laboral, debe estimarse que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no se traduce en infracción de derechos sustantivos sino en violación de derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, toda vez que la cuestión competencial se limita a determinar si una Junta Federal o una Local de Conciliación y Arbitraje resulta competente para conocer del juicio respectivo, para cuya resolución ha de aplicarse el mismo ordenamiento, esto es, la Ley Federal del Trabajo por cualquiera de las dos Juntas. En cambio, cuando la aceptación de la competencia involucre a órganos jurisdiccionales de distinto régimen como la que se da entre una Junta de

[15] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, página 93.

Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Fiscal de la Federación o el Contencioso Administrativo de alguna entidad federativa, en donde lógicamente, la aplicación primordial sería de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación o de la Ley Orgánica del Contencioso Administrativo de la entidad federativa que corresponda, el amparo debe ser indirecto."

En su momento, dicho criterio fue superado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la jurisprudencia P./J. 55/2003, que dice lo siguiente:[16]

"AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA.—Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima conveniente interrumpir y modificar en la parte relativa, la jurisprudencia 'AMPARO INDIRECTO, RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN EN LA PARTE RELATIVA, DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 166, VISIBLE EN LAS PÁGINAS 297 Y 298, SEGUNDA PARTE, DE LA COMPILACIÓN DE 1917 A 1988).', para sustentar como nueva jurisprudencia, que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la referida Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto es procedente, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque se considera que en esta resolución se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se deberá reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional."

En la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2002-PL, que dio origen al criterio P./J. 55/2003, el Pleno hizo referencia a la excepción que había establecido la Segunda Sala, así como a las consideraciones del propio Pleno en torno al tema de personalidad, y estableció que de conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, el juicio de garantías

---

[16] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 5.

indirecto es procedente contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque se afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se debería reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional.

De manera más reciente, idéntico criterio se adoptó por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la resolución de un tribunal del trabajo que declara infundada la excepción de incompetencia, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 16/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 156/2011 (9a.), de rubro:

"INCOMPETENCIA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE DESECHA O ESTIMA INFUNDADA ESA EXCEPCIÓN."

Como se ha mencionado, los señalados criterios respecto al tema de las competencias señalan lo siguiente:

(i) Es un presupuesto procesal de orden público sin el cual no puede desarrollarse válidamente un proceso jurisdiccional; y

(ii) La resolución que desecha o declara infundado el incidente respectivo afecta en grado predominante o superior a la parte que lo promovió, ya que de declararse fundada (en vía diversa) viciaría todo el procedimiento y acarrearía su reposición.

Y en tal sentido, implícitamente se consideró esto: (iii) Al resolverse un tema jurídico procesal de tal índole se está ante un acto intraprocesal de imposible reparación para la parte quejosa, lo cual autoriza a revisar previamente la constitucionalidad del acto reclamado en la vía indirecta.

Ahora bien, una vez dadas las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 2011, de manera ilustrativa, cabe señalar, grosso modo, que la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno de nuestro Máximo Tribunal, al discutir el proyecto de resolución de la contradicción de tesis 377/2014,[17] (cuyo contenido versa sobre la aplicabilidad o no de la jurisprudencia del

[17] Vid. Versión estenográfica del 20 y 24 de marzo de 2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pleno 4/2001)[18] en sesiones públicas de veinte y veinticuatro de marzo de este año, sostuvieron que debía redefinirse la jurisprudencia que categorizaba cuestiones formales o adjetivas como actos cuyos efectos dentro de juicio producían una afectación predominante o superior equiparable a actos de imposible reparación, para ceñirse a la definición que al respecto se ha dado en la nueva Ley de Amparo, específicamente en el artículo 107, fracción V, que los vincula en exclusiva con una afectación material de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

De la citada contradicción de tesis se sustentó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyos título, subtítulo y texto señalan:[19]

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).—Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral deshecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratará de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '… los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias

[18] Vid. Contradicción de tesis 50/98-PL, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11.

[19] Derivada de la contradicción de tesis 377/2013. Aprobada el 22 de mayo de 2014. Ejecutoria pendiente de publicación. Vid. Versiones estenográficas del 20 y 24 de marzo, y 22 de mayo de 2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual –a diferencia de los sustantivos– si no que depende de que llegue o no a trascender el desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme a la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '… aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado –con toda razón– a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."

Como se advierte, el Tribunal Pleno definió que:

(i) El legislador ofrece precisión jurídico conceptual para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al

definirlos como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos previstos tanto en la Constitución como en los tratados ratificados por el Estado Mexicano;

(ii) A través de dicha fórmula legal se estableció que para calificar tales actos como irreparables, resultaba menester que produjeran una afectación material a derechos sustantivos, esto es, que recayeran sobre derechos cuyo significado rebase "lo puramente procesal", y no se encuentren previstos exclusivamente en leyes adjetivas.

(iii) La afectación material significaba un impedimento al libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo (posible acto privativo); cuya materialidad sustantiva implique la afectación antagónica a un derecho meramente procesal.

Partiendo de esa base jurisprudencial y toda vez que el propio legislador determinó en la diversa fracción VII del citado precepto de la Ley de Amparo, que el amparo biinstancial procede contra actos en los que las autoridades determinen inhibir o declinar competencia; es claro que el rango que el legislador ha querido conferirle a dicha institución es el de un derecho sustantivo.

En efecto, si el legislador tácitamente excluyó en la nueva configuración de procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio a las violaciones procesales relevantes, antes catalogadas como "de afectación predominante o superior", entonces, debe estimarse que el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, no contempla un caso de excepción ni una violación procesal relevante, al determinar procedente la impugnación de las resoluciones que estimen declinar o inhibir competencia en dicha vía constitucional.

Es así, pues estimar lo contrario, pugnaría por una parte, con la lógica bajo la cual el legislador redefinió qué debía entenderse por actos de imposible reparación y, por otra, con la interpretación que al respecto sustentó el Tribunal Pleno en el sentido de que dicha concepción resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste "reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos'".

Es lógico, entonces, que las resoluciones que determinen no sólo inhibir o declinar la competencia sino también y, por mayoría de razón, declararla infundada o sostenerla deban catalogarse como actos dentro de juicio susceptibles de afectar derechos sustantivos de manera irreparable, las cuales

por su esencia y sustancia no se reducen en forma alguna a un derecho o garantía previsto exclusivamente en leyes adjetivas, sino que su contenido nítidamente se contempla y se reconoce tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14, 16 y 17, como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En efecto, como se anticipó, la competencia no debe verse únicamente como una condición o presupuesto de índole procesal, sino también abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, es decir, cual derecho fundamental previsto en la Constitución Federal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto ordenan que las personas no podrán ser juzgadas sino por el tribunal que esté facultado por la ley para ello, redimensión que implica asumir la competencia como institución o derecho humano rector de todo acto de autoridad, sin el cual no pueden molestar ni privar de sus derechos a las personas.

En ese sentido, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:

"Artículo 8. Garantías judiciales.

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. …"

Por su parte, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal establecen:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. …"

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. …"

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."

En efecto, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el debido proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos;[20] resulta evidente que la competencia del Juez o tribunal reviste especial importancia, siendo entonces que aquella institución debe identificarse plenamente con el derecho fundamental de las personas de que sólo podrán ser juzgadas por la autoridad jurisdiccional autorizada por ley para hacerlo.

Por tanto, es evidente que no sólo la sentencia definitiva o laudo (acto privativo) que no cumpla con esta exigencia carece de validez por adolecer de un presupuesto procesal, sino también el proceso mismo llevado ante una autoridad incompetente para hacerlo (acto de molestia), porque, además de carecer del citado presupuesto adjetivo se infringiría irreparablemente el derecho sustantivo de ser juzgado por un Juez competente, lo que de manera independiente involucra una infracción al debido proceso y al acceso a la jurisdicción.

Todo lo anterior, incluso, se corrobora de la interpretación que tanto la Segunda Sala como el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sustentado en las contradicciones de tesis 46/2002-SS y 10/2003 de las que, respectivamente, derivaron las jurisprudencias 2a./J. 84/2002[21] y

---

[20] Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71.

[21] Jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 203.

P./J. 20/2003, donde sostuvieron que en el juicio de amparo directo no es posible analizar la competencia de la autoridad responsable bajo ningún argumento –ni aun en suplencia de la queja, porque la legislación que la prevea se haya declarado inconstitucional–.

Ello, se dijo, porque para estar en condiciones de examinarla resultaba necesario que la contraparte en el juicio natural cuestionara tal aspecto en vía de excepción y, en su caso, a través del amparo indirecto, al tratarse de un acto de imposible reparación para efectos de dicho juicio, en virtud de que incide en la determinación de la legislación aplicable al procedimiento respectivo.

A fin de ilustrar lo antes señalado, conviene precisar la manera en que las referidas contradicciones de tesis sustentaron el criterio antes referido.

Contradicción de tesis 46/2002-SS:

"Lo anterior implica que, como lo destaca el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el caso no se trata de una competencia jurisdiccional, por lo que es evidente que su determinación es de aquellas que causa un perjuicio irreparable, en la medida en que las normas que regirán el procedimiento laboral son diversas.

"En efecto, de lo dispuesto por el apartado 'B' del artículo 123 de la Constitución, se infiere que fue intención del Constituyente establecer una diferencia clara entre el trabajo ordinario y el trabajo burocrático, considerando la naturaleza de la relación que existe en uno y otro, así como la posición de los sujetos que en ella intervienen, pues mientras que en el primero rige la libre voluntad de las partes, cuyo contenido puede ser determinado por éstas dentro de los límites protectores que fijan las normas de orden público, tendientes a salvaguardar el equilibrio entre los factores de la producción; en el segundo, la relación nace como consecuencia de un nombramiento, además de que el desempeño de la función no se encuentra sujeto a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

"Estas notas distintivas y otras procesales que hacen patente la distinción en la tramitación de un juicio laboral ordinario y uno burocrático, como podrían ser la autoridad que conoce del asunto, los sujetos que pueden intervenir en el juicio laboral, las prestaciones que se pueden reclamar, los documentos base de la acción, el planteamiento de la litis, las cargas procesales que derivan de dicho planteamiento, etcétera, permiten concluir que la resolución

en la que se determine cuál es la autoridad competente para conocer de un juicio iniciado en contra de un organismo público descentralizado, es de aquellos actos en el juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ello, deben ser impugnados ante un Juez de Distrito, porque cambia toda la litis del juicio laboral. ..."

Contradicción de tesis P./J. 10/2003:

"Lo anterior implica que en el caso no se trata de una competencia jurisdiccional, por lo que es evidente que su determinación es de aquellas que causan un perjuicio irreparable, en la medida en la que las normas que regirán el procedimiento laboral son diversas.

"De lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, se infiere que fue intención del Constituyente establecer una diferencia clara entre el trabajo ordinario y el trabajo burocrático, considerando la naturaleza de la relación que existe en uno y otro, así como la posición de los sujetos que en ella intervienen, pues mientras en el primero rige la libre voluntad de las partes, cuyo contenido puede ser determinado por éstas dentro de los límites protectores que fijan las normas de orden público, tendentes a salvaguardar el equilibrio entre los factores de la producción, en el segundo, la relación nace como consecuencia de un nombramiento, además de que el desempeño de la función no se encuentra sujeta a la libre voluntad del titular de la dependencia burocrática y del servidor, sino predeterminado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

"Estas notas distintivas y otras procesales que hacen patente la distinción en la tramitación de un juicio laboral ordinario y uno burocrático, como podrían ser la autoridad que conoce del asunto, los sujetos que pueden intervenir en el juicio laboral, las prestaciones que se pueden reclamar, los documentos base de la acción, el planteamiento de la litis, las cargas procesales que derivan de dicho planteamiento, etcétera, permiten concluir que la resolución en la que se determine cuál es la autoridad competente para conocer de un juicio iniciado en contra de un organismo público descentralizado, es de aquellos actos en el juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ello, deben ser impugnados ante un Juez de Distrito, porque cambia toda la litis del juicio laboral, de manera que si aquella resolución no se combate mediante el citado juicio de amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad y no ante la que se considere competente, la que si bien tiene las mismas funciones, no aplica la misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento.

"En esas condiciones, no procede el estudio de la competencia de la autoridad responsable en el amparo directo laboral en revisión, ni aun en el caso en el que dicho análisis se efectúe a título de suplencia con apoyo en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues, como se ha dejado precisado, esa cuestión debe necesariamente plantearse y analizarse en el juicio natural y, en su caso, la resolución en la que se declarare competente al tribunal ante el que se tramita ese juicio ordinario, para conocer del conflicto suscitado entre un organismo público descentralizado y sus trabajadores, debe combatirse a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, en el que se expresen los argumentos de inconstitucionalidad referidos y no mediante el juicio de amparo directo. …"

Como se ve, tanto la Segunda Sala como el Tribunal Pleno de nuestro Máximo Tribunal, en aplicación de la abrogada Ley de Amparo, definieron que la determinación en que se declare competente a una autoridad jurisdiccional (Junta o tribunal burocrático) tiene una ejecución de imposible reparación que necesariamente debe reclamarse ante el Juez de Distrito, dadas las repercusiones que podría tener la aplicación de procedimientos y legislaciones diversas.

Visto así, el proceso seguido ante autoridad no competente es un acto de molestia y no privativo que de suyo conlleva y produce una afectación de carácter irreparable por ese solo hecho, sin que sea necesario que, a la postre, se dilucide la controversia y se emita un acto de carácter privativo.

Por ende, si a la luz de la nueva Ley de Amparo se sitúa a las resoluciones de autoridad jurisdiccional que determinen declinar o inhibir competencia (artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo), en el mismo rango que un acto de imposible reparación (artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo) y por mayoría de razón, a las que la sostengan, cuyo contenido ha sido definido como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos; entonces, es dable concluir que el legislador ha otorgado tal carácter a las determinaciones que involucren a la competencia, entendida ésta como una institución procesal de carácter constitucional, según la cual ninguna persona puede ser molestada ni privada de sus derechos, posesiones sino en virtud de un mandamiento (judicial) dictado por autoridad idónea.

Se trata pues, de un derecho que busca la protección de otros valores superiores cuya efectividad trasciende el interés particular del sujeto afectado, para convertirse en un asunto de interés público o colectivo regulado constitucionalmente, en el que primordialmente subyace el derecho a no ser desviado de la jurisdicción y los procesos dados con antelación por el legislador.

Ahora bien, el acto reclamado es una resolución de alzada en la que se declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por las ahora quejosas y recurrentes. Así pues, ese acto puede afectar derechos sustantivos previstos en el parámetro de control de constitucionalidad y convencionalidad, por lo que se trata de un acto de imposible reparación impugnable mediante el amparo indirecto. De ahí que, resulte ilegal la sentencia recurrida en la que se declaró improcedente el amparo, con el argumento de que la resolución reclamada no es un acto de imposible reparación.

Igual criterio ha sustentado este Tribunal Colegiado en la ejecutoria de veintinueve de mayo de dos mil catorce emitida en el amparo en revisión 126/2014.

En tales condiciones, al haber resultado infundada la causa de improcedencia expuesta por la Juez de Distrito y al no advertirse otro motivo de improcedencia, debe levantarse el sobreseimiento y examinarse el fondo del asunto con fundamento en el artículo 93, fracciones I y V, de la Ley de Amparo.[22]

Considerando lo anterior, es innecesario examinar los restantes agravios, pues el que se analizó ha resultado suficiente para dejar insubsistente el sobreseimiento que pretenden controvertir las recurrentes. Al respecto, se comparte y se estima aplicable, por identidad de razón, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la jurisprudencia VI.1o. J/102 que enseguida se transcribe:

"AGRAVIOS. SI EL EXAMEN DE UNO LLEVA A LEVANTAR EL SOBRESEIMIENTO. ES INNECESARIO ESTUDIAR LOS RESTANTES.—Si el estudio de un agravio pone de manifiesto lo infundado de la causal de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, y no apareciendo probado otro motivo legal para sostener el sentido del fallo, lo procedente atento a lo dispuesto por el artículo 91 fracción III de la Ley de Amparo, será revocar la resolución

---

[22] "Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:
"I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;
"...
"V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda."

recurrida y entrar al examen del fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, lo cual vuelve innecesario el examen de los restantes agravios."[23]

SÉPTIMO.—Análisis de los conceptos de violación.

Enseguida se analizarán los motivos de inconformidad en un orden temático distinto al de su exposición.

1. Planteamientos que no controvierten las consideraciones de la resolución reclamada.

En diversas partes del único concepto de violación, afirman las quejosas que la Sala responsable erró al desestimar su excepción de incompetencia, por las siguientes razones:

a) Las demandadas opusieron en tiempo y forma la excepción de incompetencia por declinatoria, satisfaciendo los requisitos exigidos en el Código de Procedimientos Civiles de Quintana Roo.

b) Tal excepción se sustentó en el artículo 157, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles de Quintana Roo, el cual establece que tratándose de las acciones personales, será competente el Juez del domicilio del demandado.

c) En este sentido, las enjuiciadas adujeron que se ejerció en su contra una acción personal de responsabilidad civil y que su domicilio se encuentra en **********, número **********, colonia **********, en el Distrito Federal. Por tanto, plantearon que resulta incompetente el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.

d) Para demostrar lo anterior, las demandadas aportaron diversas facturas y otras pruebas con su contestación a la demanda, medios de convicción con los que se acredita que su domicilio está en el Distrito Federal. Asimismo, en la audiencia celebrada ante la Sala, reiteraron el ofrecimiento de las aludidas pruebas y ofrecieron nuevos poderes en los que se aprecia que el domicilio se ubica en el Distrito Federal.

e) Sin embargo, la Sala desestimó la excepción de incompetencia, con lo que dejó de considerar los planteamientos y las pruebas de las enjuiciadas,

---

[23] *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 84, diciembre de 1994, página 51.

infringió las formalidades esenciales del procedimiento y emitió una resolución incongruente, subjetiva, ilegal y violatoria de derechos humanos y de la garantía de audiencia, en contravención a los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal.

Son inoperantes los anteriores conceptos de violación, pues no controvierten la consideración toral en la que se sustenta la resolución reclamada.

En efecto, en los amparos de estricto derecho, el inconforme tiene la carga de controvertir los argumentos medulares que rigen el sentido del acto reclamado. De otro modo, el juzgador no podría examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente. Por tanto, si el peticionario de amparo no asume eficazmente su carga argumentativa, el acto impugnado subsistirá con apoyo en las consideraciones que, por intocadas, adquieran firmeza.

Al respecto es aplicable por identidad de razón el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuyos rubro y texto dicen:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.—Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."[24]

Ahora bien, la Sala responsable desestimó la excepción de incompetencia por declinatoria, con base en la siguiente línea argumental:

---

[24] *Semanario Judicial de la Federación*, Sexta Época, Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27.

i. Tratándose de acciones personales, es competente el Juez que corresponda al domicilio del demandado, conforme al artículo 157, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles de Quintana Roo.

ii. En el caso se ejerció una acción personal de responsabilidad civil, pues el actor demandó a las sociedades enjuiciadas el pago de daños y perjuicios, con motivo del hecho dañoso que dijo haber sufrido (desplome de barrera de acceso sobre su automóvil) en la entrada del andén de la tienda departamental **********, localizada en esta ciudad.

iii. En tales condiciones, es competente para conocer del asunto el Juez que corresponda al domicilio de la parte demandada.

iv. Ciertamente, con las pruebas de las enjuiciadas se demuestra que el domicilio de su matriz se encuentra en el Distrito Federal.

v. Sin embargo, independientemente del domicilio de la matriz, para efectos de la competencia territorial, puede considerarse como domicilio de las enjuiciadas el que corresponde a la sucursal del lugar en el que ocurrió el hecho dañoso materia de la litis. Lo anterior, conforme a los artículos 557, 558 y 559 del Código Civil de Quintana Roo y las tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubros:

"RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE. DOMICILIO LEGAL PARA SU PAGO, CUANDO EL RIESGO SE PRODUCE EN EL LUGAR DONDE TENGAN ESTABLECIDAS SUCURSALES O AGENCIAS. COMPETENCIA."[25]

"COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. LA SUCURSAL DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA ES UN HECHO NOTORIO PARA CONOCER SU DOMICILIO Y DECIDIR EL CONFLICTO RESPECTIVO."[26]

vi. Así pues, el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, es competente para conocer del asunto, ya que ejerce jurisdicción en el domicilio donde se encuentra la sucursal III de las demandadas, en la que ocurrió el hecho dañoso materia de la litis.

---

[25] *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 193-198, Cuarta Parte, página 102.
[26] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro I, Tomo 3, octubre de 2011, página 1614.

Por su parte, en los conceptos de violación que nos ocupan, las quejosas sostienen que probaron que su domicilio se encuentra en el Distrito Federal y, por ende, que resulta incompetente el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.

Así pues, tales motivos de inconformidad resultan inoperantes, ya que no combatieron la consideración toral del acto reclamado, en la que se expuso, en síntesis, lo siguiente: a) Está demostrado que el domicilio de la matriz de las demandadas se localiza en el Distrito Federal; y, b) Sin embargo, puede considerarse como su domicilio la sucursal ubicada en Cancún, Quintana Roo, en la que ocurrió el hecho generador de los daños y perjuicios litigiosos. Por tanto, esa consideración medular permanece incólume, de modo que sigue rigiendo el sentido de la resolución reclamada.

2. Errores de escritura respecto a la acción y al nombre de una codemandada.

En diversas partes del único concepto de violación, las quejosas refieren que la Sala responsable incurrió en las siguientes incongruencias:

i. Expresó que en el juicio natural se había ejercido la acción reivindicatoria, cuando en realidad se ejerció una acción personal de responsabilidad civil; y,

ii. Mencionó a una persona ajena a la litis de nombre "**********, Sociedad Anónima de Capital Variable".

Es fundado pero inoperante el anterior motivo de inconformidad.

Ciertamente, en algunos fragmentos del acto reclamado, la Sala mencionó de forma equivocada la acción ejercida en el juicio natural y el nombre de una de las codemandadas. Específicamente, en tres párrafos del considerando IV y en los puntos resolutivos primero y segundo, se refirió a uno de los codemandados como "**********", en lugar de su denominación completa "**********". Asimismo, en el resolutivo segundo se refirió al proceso natural como "juicio ordinario civil reivindicatorio", a pesar de que la acción ejercida es de responsabilidad civil.

Sin embargo, esos errores de escritura resultan intrascendentes y no ameritan la concesión del amparo. Es así, porque del texto íntegro de la reso-

lución, se advierte que la Sala no sustentó su análisis en una inexistente acción reivindicatoria ni pretendió pronunciarse sobre una persona ajena a la litis.

En efecto, en el rubro de la resolución reclamada, el tribunal de alzada expresó correctamente: "Juicio: ordinario civil. Pago de daños y perjuicios". Asimismo, en el resultando 1, narró que la actora había demandado "en la vía ordinaria civil la acción personal de responsabilidad". Finalmente, en el considerando IV, expresó: "… del análisis minucioso de las prestaciones solicitadas … se desprende que lo reclamado son los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los hechos acontecidos en el domicilio de la demandada. Acción personal que definitivamente debe reclamarse ante el Juez del domicilio del demandado por ser una acción personal."

Así, al resolver sobre la excepción de incompetencia, el tribunal común consideró que el actor había ejercido una acción personal de responsabilidad civil y, sobre esa base, determinó que el Juez competente era el del domicilio de la parte demandada. Por tanto, es irrelevante que en el resolutivo segundo se haya calificado inexactamente al juicio ordinario civil como "reivindicatorio". A pesar de ese error de escritura, es evidente que la Sala se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción personal de responsabilidad civil, y no sobre la competencia para conocer de una acción real reivindicatoria.

Asimismo, aunque en varios fragmentos de la resolución, el tribunal responsable mencionó el nombre "**********", es claro que no quiso referirse a una persona ajena a la litis (como aducen las quejosas), sino que aludió a la codemandada "**********". Es así, porque al mencionar la denominación "**********", la responsable refirió que se trataba de una codemandada, lo que indica que simplemente suprimió por error la palabra "**********" en el nombre expresado. Además, en otras partes de la resolución (resultandos 1 y 5 y considerando II), la Sala sí mencionó la denominación correcta de la codemandada, lo que confirma su intención de referirse a "**********", y no a otra persona.

En consecuencia, resulta intrascendente que en diversos fragmentos de la resolución se haya pronunciado de forma inexacta el nombre de la sobredicha enjuiciada, pues ese *lapsus* cálami no genera dudas sobre la identidad de la persona a la que aludió la autoridad responsable. Al respecto, se comparte y se estima aplicable por identidad de razón la tesis I.4o.A.34 K (10a.),

del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubro y texto dicen:

"NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE.—El nombre es un elemento de identificación de las personas que, en términos de ley, debe expresarse completo y en la forma exacta en que se consigna en el acta de nacimiento. No obstante, cuando el nombre propio o de pila de una persona se integra por más de un nombre, existe una alta posibilidad de que sea señalado en forma incompleta, y esa realidad no puede, inexorablemente, ser tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener que se trata de sujetos distintos, si los elementos empleados permiten su identificación, a condición de que, por las circunstancias específicas, no exista riesgo de que se perjudique a terceros o se pueda confundir la persona de que se trata, afectando la seguridad jurídica en una situación concreta. De acuerdo con lo anterior, los operadores jurídicos, entre los que se encuentran tanto las autoridades administrativas como los juzgadores, deben ponderar, en cada caso, si la referencia incompleta del nombre de una persona permite su identificación, para lo cual deben tomar en cuenta las circunstancias específicas en que la participación de ésta se produce, pues no merece el mismo trato el apersonamiento que persigue la obtención de un beneficio, como puede serlo una herencia o el cobro de un premio, que la actuación cuyo propósito es la defensa de determinados derechos ante un órgano del Estado, debido a que en el primer supuesto, por tratarse de una situación que le reporta un aprovechamiento personal o una utilidad que desplaza a otro u otros, es exigible que por todos los medios a su alcance se corrobore la identidad del compareciente, lo cual no es razonable en el mismo nivel de exigencia en la hipótesis restante."[27]

En síntesis, es cierto que en algunos fragmentos del acto reclamado la Sala expresó de forma inexacta el nombre de una codemandada ("**********" en lugar de "**********"). Asimismo, es verdad que en el resolutivo segundo, asentó de forma inexacta la acción sobre la que versa el juicio natural (reivindicatoria en lugar de responsabilidad civil). Sin embargo, estos errores de

[27] *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1194.

escritura resultan intrascendentes, pues se advierte con claridad que la responsable no sustentó su análisis en una inexistente acción reivindicatoria ni pretendió pronunciarse sobre una persona ajena a la litis.

Luego, en aras del principio de economía procesal, debe desestimarse el concepto de disenso en el que se impugnan los aludidos errores de escritura, pues proceder de otro modo a nada práctico conduciría y sólo sería motivo de una inútil tardanza en la resolución definitiva del asunto. Al respecto es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 108 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.—Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."[28]

En tales condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, en un amparo civil en el que rige el principio de estricto derecho, debe negarse a las quejosas la protección federal solicitada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución.

SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable y **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto atribuido a la Sala Mixta del Tribunal

[28] *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000*, Tomo VI, jurisprudencia SCJN, Materia Común, página 85.

Superior de Justicia del Estado, el cual fue precisado en los antecedentes de este fallo. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando séptimo de la presente resolución.

Notifíquese; como corresponda y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el libro electrónico de registro de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por unanimidad de votos de los Magistrados Livia Lizbeth Larumbe Radilla (presidenta) y Juan Ramón Rodríguez Minaya (ponente), así como de Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal,[29] con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis 2a./J. 156/2011 (9a.) y P./J. 37/2014 (10a.), así como la ejecutoria de ésta, relativa a la contradicción de tesis 377/2013 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, página 1395; *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 39, y Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 6, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN. Antes de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, las voces "derechos humanos y sus garantías", eran términos que solían confundirse, ambigüedad que posiblemente derivaba de la anterior denominación del capítulo I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, titulado "De las garantías individuales". Sin embargo, el Poder Reformador de la Constitución, con las citadas reformas, elevó a rango constitucional su distinción, como deriva de las siguientes

[29] Sesión de dieciséis de abril de dos mil trece, según oficio ********** de la propia fecha, signado por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

menciones: i) el capítulo I cambió su denominación a "De los derechos humanos y sus garantías"; ii) en el artículo 1o. se especificó que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales "así como de las garantías para su protección", y iii) en el numeral 103, fracción I, se especificó que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por infracción a los derechos humanos y las "garantías otorgadas para su protección". Luego, para el Constituyente Permanente los derechos y sus garantías no son lo mismo, ya que éstas se otorgan para proteger los derechos humanos; constituyen, según Luigi Ferrajoli, los "deberes consistentes en obligaciones de prestación o en prohibiciones de lesión, según que los derechos garantizados sean derechos positivos o derechos negativos", es decir, son los requisitos, restricciones, exigencias u obligaciones previstas en la Constitución y en los tratados, destinadas e impuestas principalmente a las autoridades, que tienen por objeto proteger los derechos humanos; de ahí que exista una relación de subordinación entre ambos conceptos, pues las garantías sólo existen en función de los derechos que protegen; de tal suerte que pueden existir derechos sin garantías pero no garantías sin derechos. Así, a manera de ejemplo, puede decirse que el derecho humano a la propiedad tiene, entre otras garantías, las de audiencia y legalidad, pues prohíbe a la autoridad molestar a un particular sin mandamiento escrito en el que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que los gobernados sean privados de la propiedad sin previa audiencia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o. J/14 (10a.)

Amparo en revisión 126/2014. Gladys Etelvina Burgos Gómez. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Queja 104/2014. María de Fátima Amaro Baeza. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Amparo en revisión 143/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Amparo en revisión 145/2014. Stewart Title Riviera Maya, S.A. de C.V. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Queja 124/2014. Andrea Lotito. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE.

AMPARO DIRECTO 614/2011. 8 DE DICIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIA: MARÍA ESTELA ESPAÑA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Por principio de cuentas es de señalarse que en atención al sobreseimiento decretado en el auto admisorio no se estudiarán aquellos argumentos en los que la parte quejosa combate actos de la Juez de primera instancia, mismos que por esa razón serían inoperantes.

Establecido lo anterior, es preciso indicar que del análisis conjunto de sus conceptos de violación, se advierte que la quejosa argumenta, en esencia, que la sentencia reclamada viola en su perjuicio los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque desestima el alcance natural y lógico de las pruebas que ofreció bajo consideraciones de carácter parcial y subjetivo, consistentes en que el estado de cuenta que se le envió a su domicilio en acatamiento a lo establecido en la cláusula décima segunda del contrato de apertura de crédito con intereses y garantía hipotecaria, no es el que contiene el estado real de su crédito, puesto que el que en realidad tiene valor es el que deriva del sistema operativo del banco.

Esto, como se verá a continuación, es fundado.

Antes de indicar las razones de este aserto, se estima necesario relatar de manera breve y concisa los antecedentes y datos relevantes del asunto, los que se aprecian de las constancias de autos mismas que tienen pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 202 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

1. Mediante escritura pública **********, *********, tirada ante la fe del notario público número seis del Distrito Federal, se hizo constar, entre otros actos: el contrato de compraventa, celebrado entre **********, como compradora y **********, como vendedora; los contratos de apertura de crédito con intereses e hipoteca que celebran por una parte **********, como acreditante y la persona física citada en primer término como acreditada y, por último, el diverso contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria celebrado por una parte por el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el consentimiento del referido banco, como acreedor y, por otra, por **********, como deudora.

La garantía hipotecaria se estableció respecto del inmueble descrito como el **********.

En relación con el contrato de apertura de crédito con interés e hipoteca, en su cláusula sexta las partes pactaron el pago de intereses de la siguiente manera:

"Sexta. Las cantidades ejercitadas por el 'acreditado' causarán intereses sobre saldos insolutos del crédito, a una tasa anual igual a la estimación del costo porcentual promedio de captación (CPP) que mensualmente da a conocer el Banco de México a través del 'Diario Oficial de la Federación', según resolución del propio banco publicada en ese Diario el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y uno, correspondiente al mes inmediato anterior al mes en que se devenguen los intereses respectivos ... Los intereses se calcularán dividiendo la tasa anual de interés aplicable entre trescientos sesenta y multiplicando el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos durante cada mes en el cual se devenguen los intereses a dicha tasa.—Los intereses serán pagaderos por mensualidades vencidas, a partir de la fecha de la firma del presente instrumento, a más tardar el último día inhábil del calendario de cada mes ..."

En la cláusula octava, los contratantes establecieron el beneficio de la liquidación del crédito por el pago puntual de la deuda principal y los intereses ordinarios, una vez transcurrido el plazo de veinte años.

"Octava. El 'acreditado' se obliga a pagar a 'el banco' el saldo insoluto del crédito mediante amortizaciones mensuales vencidas, a partir de la fecha en que se determine la primera erogación neta de acuerdo a la cláusula quinta cuyo monto mínimo será igual a la cantidad positiva que resulte de restar, a la erogación neta del mes en que se trate según dicha cláusula, el monto de los intereses ordinarios del mismo mes conforme a la cláusula sexta. Estos pagos se efectuarán el mismo día en que se cubran los intereses del crédito.—Atento a lo dispuesto en el artículo ochenta y cuatro, fracción diecisiete romano, de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito el plazo máximo del crédito será de veinte años. Si transcurrido dicho plazo contado a partir de la fecha de la firma del presente contrato, existiera algún saldo insoluto del crédito a cargo del 'acreditado', éste no estará obligado a efectuar pago adicional alguno, siempre y cuando se encuentre al corriente en sus pagos principal o intereses en los términos de este instrumento."

Y en la cláusula décima segunda, las partes convinieron la obligación del banco de enviar al acreditado de manera mensual, un estado de cuenta:

"Décima segunda. 'El banco' se obliga a proporcionar al 'acreditado', mensualmente, un estado de cuenta en el que de manera clara se indique el saldo insoluto del crédito la tasa de interés determinada conforme a la cláusula sexta, así como, en su caso, la erogación neta a su cargo.—El 'acreditado' manifiesta a 'el banco' su conformidad en que tales datos le sean proporcionados en el recibo de pago mensual mediante lo (sic) cual se dará por recibido el estado de cuenta."

2. Refiere la parte quejosa que a su domicilio llegó el estado de cuenta correspondiente al pago número doscientos cuarenta de doscientos cuarenta, es decir, el último del crédito de referencia, relativo al periodo que va del uno al treinta de abril de dos mil nueve, en el que se consignó como cantidad a pagar **********, la que resulta de la suma de los conceptos de intereses y pólizas de vida (anexo tres).

Como se aprecia de su análisis, en el referido estado de cuenta salvo los conceptos antes indicados y el de total del adeudo, que asciende a la cantidad de **********, todos los demás aparecen en ceros, destacadamente el relativo a la amortización, es decir, el pago que, en su caso, debía cubrirse en el periodo por lo que respecta a la deuda principal.

3. La quejosa procedió a pagar la cantidad de ********** y dado lo establecido en la segunda parte de la cláusula octava del contrato de apertura de crédito con interés e hipoteca, antes transcrita, consideró que operó en su favor el beneficio de la liquidación del crédito (al transcurrir el plazo máximo del crédito).

4. Es el caso de que con posterioridad a estos eventos, la quejosa fue requerida extrajudicialmente por un despacho de cobranza al servicio del banco para que acudiera a pagar su adeudo, ya que se le indicó que no estaba al corriente de sus pagos. Lo anterior, con la advertencia de que ante su incumplimiento se daría por vencido anticipadamente el plazo para el reembolso y se le exigiría judicialmente la totalidad del adeudo (anexo cuatro).

5. En esas condiciones, ********** presentó una reclamación ante **********, la cual fue contestada en sentido negativo mediante escrito de veintiuno de octubre de dos mil nueve (anexo cinco).

En la parte conducente, se indicó:

"En tal virtud, hacemos de su apreciable conocimiento que su reclamación resulta improcedente, ya que después de haber llevado a cabo una revisión minuciosa del histórico de pagos de su crédito, nos hemos percatado que usted llevó a cabo su pago número 240 por un monto de $ **********, cuando el monto exigible era $ **********, lo anterior generó un remanente por $ ********** que ocasionó la cancelación del beneficio de liquidación de su crédito.—No es ocioso mencionar que el pago oportuno de las amortizaciones de su crédito era una condición obligatoria para la aplicación del beneficio citado, por lo cual no es posible llevar a cabo corrección alguna, puesto que no contamos con elementos para deslindarle responsabilidad en cuanto a los pagos realizados de su crédito."

6. Ante la negativa de la institución financiera en cita, de liberar la hipoteca respectiva, ********** presentó una reclamación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), la que se registró con el número **********.

Durante el procedimiento correspondiente, la institución financiera negó rotundamente que la reclamante tuviera la razón.

En el informe adicional de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, en lo que interesa, expresó:

"A mayor abundamiento, se comunica que mi representada verificó los estados de cuenta entregados por la parte reclamante, percatándose que los mismos no están completos, toda vez que hace falta el estado de cuenta, con fecha de emisión 31 de marzo de 2009, que comprende el periodo faltante, del 02 de marzo de 2009 al 31 de marzo de 2009, y comprende además la amortización 240 de 240. En dicho estado de cuenta se le indica al cliente que su fecha límite de pago es al día 30 de abril de 2009, por la cantidad de $ **********, siendo éste el pago que el cliente no realizó de manera completa y por el cual está vencido. ... Es importante señalar que el estado de cuenta que la parte reclamante recibió con fecha de emisión del 30 de abril de 2009, sólo refleja el total del saldo vencido después de la fecha de vencimiento del crédito, y está totalizando el adeudo que el cliente tiene a su cargo."

A dicho escrito, el banco acompañó el estado de cuenta del mencionado crédito, correspondiente al pago doscientos cuarenta de doscientos cuarenta, por el periodo del dos al treinta y uno de marzo de dos mil nueve, en el que se establece como amortización la cantidad antes indicada y ningún concepto aparece en ceros, es decir, se trata de un estado que si bien es cierto que como el que recibió la quejosa, corresponde al último pago del crédito, no menos lo es que difiere diametralmente de aquél (foja 80 del anexo seis).

7. Como las partes no llegaron a un arreglo y la institución financiera no quiso someterse al arbitraje, la citada comisión reservó sus derechos y dio por concluida la reclamación.

8. Así las cosas, como se relató en el resultando primero de esta resolución, ********** demandó a **********, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato de apertura de crédito con intereses y garantía hipotecaria y la liberación de la garantía hipotecaria.

La parte demandada contestó la demanda y negó categóricamente el derecho de la actora.

De la secuela procesal es importante rescatar que la actora ofreció la prueba confesional a cargo de la demandada. En las posiciones quinta y sexta, calificadas de legales por el Juez natural, el apoderado de la indicada institución financiera expuso lo siguiente:

Posición cinco:

"5. **********, envió por correspondencia a la señora ********** el estado de cuenta de fecha treinta de abril del año dos mil nueve en donde se confirmaba que la señora ********** había cumplido el pago número 240 de 240."

Respuesta:

"Que sí es cierto, aclarando que no necesariamente el estado de cuenta que se envía contiene el estado real que guarda su crédito, éste es en todo caso el que se hace constar en el sistema electrónico que para tal efecto lleva y conserva mi poderdante."

Posición seis:

"6. Que el estado de cuenta número 240 de 240 expedido por **********, indicaba que en fecha treinta de abril del dos mil nueve el saldo total vigente del crédito de la señora ********** estaba en ceros."

Respuesta:

"Que sí es cierto, aclarando que debe considerarse lo señalado en la anterior posición absuelta por el suscrito."

De lo anterior se sigue que no hay controversia entre las partes en relación con el hecho de que el banco envió a la ahora quejosa un estado de cuenta que indicaba que era el último (doscientos cuarenta de doscientos cuarenta) y en el que se consignaba una cantidad diversa a la que supuestamente obra en su sistema, que es la que refirió en el procedimiento conciliatorio de referencia.

9. Seguido el juicio en todas sus etapas, el nueve de mayo de dos mil once, el Juez de primera instancia dictó sentencia en la que como se indicó en el resultando cuarto de la presente resolución, concluyó en lo que interesa que la parte actora no probó su acción.

Al respecto, el citado juzgador, luego de darle valor probatorio a las pruebas ofrecidas por la actora, argumentó medularmente que las mismas resultaban insuficientes, pues si bien era cierto que varios de los rubros contenidos en el estado de cuenta aportado por la quejosa estaban en ceros, también lo es que la cantidad efectivamente pagada únicamente fue por concepto de intereses y pólizas de vida, sin que hubiera pago al capital lo que afirmó, se advertía del propio documento del que se desprendía que aún existía un saldo insoluto, aspecto que cabe señalar, no fue explicado puesto que es manifiesto que en esa documental el pago de la cantidad a amortizar, es decir, lo que la deudora debía pagar por el capital estaba en ceros.

Lo anterior, indicó, impedía la actualización de lo pactado en la cláusula octava del contrato correspondiente, porque la deudora-actora no acreditó estar al corriente en sus pagos por principal e intereses.

10. En contra de esta determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación del que correspondió conocer a la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuyos integrantes, por sentencia dictada el diez de agosto de dos mil once en el ********** (que constituye el acto aquí reclamado), determinaron confirmar en sus términos la sentencia impugnada.

Las razones que tuvieron para ello pueden apreciarse de la transcripción plasmada en el considerando cuarto de esa sentencia, mismas que se reducen, en esencia, a considerar que la actora no acreditó haber cubierto la totalidad de la suma que estaba obligada a pagar, lo que en buena medida obedeció al hecho de haberle dado valor al estado de cuenta que exhibió el banco en el procedimiento de reclamación, respecto del pago número doscientos cuarenta de doscientos cuarenta, derivado de su sistema, el que a diferencia del que se le remitió a la actora mismo que fue exhibido por ella como documento principal de sus alegaciones, sí tiene una cantidad en el espacio relativo a

la cantidad que debía cubrirse por concepto de amortización la que no se completó con la cantidad que pagó la aquí quejosa.

Hasta aquí los antecedentes y datos relevantes del asunto. A continuación se realizará el estudio de fondo del asunto.

Como se adelantó, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que los conceptos de violación planteados por la quejosa son fundados, porque como, esencialmente, lo refiere, la Sala responsable no efectuó un correcto análisis de los medios probatorios ofrecidos, admitidos y desahogados en la secuela procesal, toda vez que demeritó el alcance demostrativo de las pruebas de la actora, aquí peticionaria, con base en el estado de cuenta aportado por el banco, derivado de su sistema, cuando ese documento no debía ser considerado al suponer un actuar contradictorio.

El entendimiento de lo anterior supone la explicación previa del alcance del principio general de derecho de la buena fe y una de sus derivaciones en el proceso, conocida como la doctrina de los actos propios.

El principio general de la buena fe.

La buena fe es, ante todo, un concepto jurídico indeterminado que ha sido utilizado en todos los ordenamientos jurídicos.

La doctrina ha discutido si su naturaleza es psicológica (también llamada subjetiva o cognoscitiva) o ética (denominada por algunos autores como objetiva).

Desde la primera perspectiva, la buena fe se define como la creencia de una persona de que actúa conforme a derecho, lo que no equivale a displicencia ni a confianza excesiva, sino que únicamente supone la creencia o ignorancia de no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Por lo que hace a la manifestación ética u objetiva, que es la que interesa al presente estudio por ser la que mayormente sustenta a la doctrina en análisis, se tiene que la buena fe constituye un principio general del derecho, consistente en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta.

En esta dimensión, es decir, como principio general de derecho, la buena fe es una regla de conducta que exige a las personas de derecho una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa. Implica un deber de

actuar con coherencia y observar en el futuro la conducta que los actos propios hacían prever.[1]

En nuestro sistema legal, el principio general de la buena fe es base inspiradora y, por tanto, posee un alcance absoluto e irradia su influencia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones jurídicas.

Así lo ha considerado, esencialmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (extinta Tercera Sala), desde la Quinta Época, como lo demuestra la siguiente tesis, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo CXXXII, visible en la página 353, que establece:

"BUENA FE, PRINCIPIO DE.—Siendo la buena fe base inspiradora de nuestro derecho, debe serlo, por tanto, del comportamiento de las partes en todas sus relaciones jurídicas y en todos los actos del proceso en que intervengan."

Cabe señalar que la aplicación de la buena fe, está autorizada en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, en la que a falta de ley se permite la aplicación de los principios generales del derecho, al que ésta pertenece.

Esta disposición constitucional está en perfecta armonía con el desarrollo de la doctrina de los actos propios, que como se verá, tiene carácter residual y encuentra en la existencia de disposición normativa expresa, una de sus limitaciones.

En adición a lo anterior, es importante destacar que su vigencia y utilización en el proceso también emana del artículo 17 de la Carta Magna, relativo a la tutela judicial efectiva, puesto que al proscribirse la autotutela resulta palmario que el Estado tiene un interés especial en procurar que el proceso se desarrolle en la forma legalmente prevista, sin perjuicio o demérito de una de las partes, o dilaciones indebidas, ocasionadas tanto por los vicios del órgano jurisdiccional como por la conducta deshonesta y mendaz de los litigantes, por lo que se impone el rechazo a toda actuación maliciosa o temeraria de las partes, pues como lo entiende Picó I Junoy,[2] "... la mala fe procesal

---

[1] López Mesa, Marcelo J. La doctrina de los actos propios. Doctrina y Jurisprudencia. Ed. Reus, Buenos Aires, 2005, p. 61.

[2] Picó I Junoy, Joan, El principio de la buena fe procesal, "Premio Nacional San Raimundo de Peñafort" de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación (2003), Ed. J. Ma. Bosch, Barcelona, 2003, p. 27.

puede poner en peligro el otorgamiento de una efectiva tutela judicial, por lo que debe en todo momento proscribirse."

Por último, a nivel normativo secundario es dable mencionar que como se advierte del análisis de los ordenamientos civiles sustantivos, se trata de una figura a la que el legislador se refiere cada vez que lo considera necesario como supuesto lógico de la norma tanto jurídica como de convivencia humana.[3]

El principio general de la buena fe procesal.

El principio de la buena fe procesal es la manifestación en el ámbito jurisdiccional del principio general de la buena fe. Éste, como destaca la doctrina, no sólo despliega su eficacia en el campo del derecho privado, sino también en el público en orden a preservar un mínimo de conducta ética en todas las relaciones jurídicas.

La buena fe procesal permite observar el nivel ético de una ley adjetiva y desalentar la conducta maliciosa o fraudulenta de las partes para conseguir en lo posible que no venza el más diestro en el uso de las normas procesales, sino el que tenga razón o, al menos, que exista la certeza de que quien venza lo hace con honestidad.[4]

Funciones del principio general de la buena fe.

El deber general de actuar de buena fe tiene la función de colmar las lagunas del sistema legal pues la ley no puede prever todas las situaciones posibles mediante normas concretas, ni todos los abusos que las partes pueden cometer, una en perjuicio de la otra.

El principio general de la buena fe cierra el sistema legislativo, es decir, ofrece criterios para colmar aquellas lagunas que se manifiestan en las cambiantes circunstancias de la vida social, lo que no significa que el Juez deba entrometerse en las relaciones de las partes con el pretexto de remediar abusos o evitar situaciones de desequilibrio de intereses, pues los contratantes

---

[3] Ejemplo de ello son los artículos 806, 807, 811, 840 y 2232 del Código Civil para el Distrito Federal, entre otros. Dicho principio ha sido incorporado en diversas hipótesis como son la buena fe posesoria; la buena fe contractual; la cláusula *rebus sic stantibus*; la buena fe del *accipiens* en el pago de lo indebido; la buena fe de los terceros y la buena fe en el matrimonio putativo.
[4] Picó I Junoy, Joan, op. cit., p. 27.

"son los Jueces de su conveniencia; el Juez lo es sólo del abuso, de la lesión o de la mala fe, no de la conveniencia contractual".[5]

Ello implica que las partes de una relación contractual deben comportarse en forma transparente y coherente de modo tal que, cuando una de ellas, con su proceder ha suscitado la confianza de la otra con relación a su actuación futura, no debe defraudar dicha confianza.

Las derivaciones del principio general de buena fe. La doctrina de los actos propios.

La doctrina y la jurisprudencia comparadas (España, Alemania, Colombia y Argentina, principalmente), a partir del principio de buena fe han derivado instituciones como el ejercicio antisocial del derecho (regulado expresamente en la Constitución española), el retraso desleal en el ejercicio de los derechos, la doctrina de la apariencia, la doctrina de los actos propios y algunos otros.

Para la resolución del presente caso interesa exclusivamente esta última doctrina.

La regla que deriva del brocardo[6] *venire contra factum proprium nulla conceditur*, o doctrina de los actos propios (o de respeto a los actos propios), se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior.[7]

Su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerada si se estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.

Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias, podrían ser ejercidos lícitamente.

Como lo señala López Mesa,[8] "La inadmisibilidad de ir contra los propios actos constituye técnicamente un límite del ejercicio de un derecho sub-

---

[5] López Mesa, Marcelo J., op. cit., p. 67.
[6] Del latín *brocardus*. Es un veredicto, axioma legal o máxima jurídica, normalmente escrito en latín, que expresa concisamente un concepto o regla evidente.
[7] López Mesa, Marcelo J., op. cit., p. 89.
[8] Ídem, p. 90.

jetivo o de una facultad derivada del principio de buena fe y particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente."

La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional de Colombia,[9] entiende a esta doctrina de la siguiente manera:

"9. El derecho fundamental al debido proceso comprende, como lo ha señalado esta Corporación, no sólo las garantías del artículo 29 de la Carta, sino también otro cúmulo de valores y principios de la misma raigambre constitucional que hacen que vaya más allá del cumplimiento de los requisitos que la ley procesal impone (debido proceso legal), a través de la irrestricta observancia de los demás derechos que permitan la vigencia de un orden justo. Dentro de estos valores y principios, a juicio de la Sala, resulta especialmente relevante para el análisis del problema jurídico planteado, el de respeto del acto propio.

"10. El principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro. Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto que creó situaciones particulares y concretas a su favor.

"De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos consistente en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos."

---

[9] Sentencia T-204 del cuatro de marzo de dos mil cuatro. Expediente T-736650. Este fallo adquiere relevancia para la resolución del presente juicio de amparo, porque se trató un tema similar. En efecto, ahí se indicó que el Banco al remitir al accionante la relación de pagos hechos durante el año dos mil y al concluir que el saldo de la deuda hipotecaria al treinta y uno de diciembre de ese año era de $0.00 pesos, asumió una posición jurídica concreta frente al crédito hipotecario del accionante y así se lo comunicó, con lo que creó una expectativa sobre el estado de su deuda hipotecaria, y lo llevó a creer que su crédito había quedado absolutamente cancelado. Así, concluyó que si bien era cierto que no había paz y salvo expedido por la demandada (es decir, el documento que acredita el pago total del crédito), la conducta de ésta (Banco) mostraba claramente que la obligación fue cancelada en su totalidad con fundamento en la información suministrada por el banco.

Esta doctrina no es sinónimo de privación del derecho subjetivo, pues no implica su extinción, sino únicamente como se indicó, una limitación a su ejercicio, para proteger el interés de quien confió en el comportamiento previo del titular del mismo.

Más simplemente, el brocardo analizado es una aplicación del principio de la confianza en el tráfico jurídico y no una específica prohibición de la mala fe o de la mentira.

Presupuestos y requisitos de aplicación.

Aunque la doctrina y la jurisprudencia de cada país han delineado individualmente los presupuestos y requisitos de aplicación de esta teoría, existe consenso en señalar que los mismos básicamente son: a) un comportamiento vinculante y eficaz; b) un comportamiento posterior contradictorio que afecta las expectativas que surgen del anterior; y, c) identidad jurídica de los sujetos actuantes en ambas situaciones.

En Argentina, por ejemplo, los presupuestos para la aplicación del *venire contra factum proprium*, son:

a) Una situación jurídica preexistente.

b) Una conducta del sujeto, jurídicamente eficaz, que suscite en la otra parte una expectativa seria de comportamiento futuro.

c) Una pretensión contradictoria con esa conducta, atribuible al mismo sujeto.[10]

Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia[11], referente latinoamericano en esta doctrina, ha establecido como condiciones para su aplicabilidad:

a) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz.

b) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción –atentatorio de la buena fe– existente entre ambas conductas.

---

[10] Ídem, p. 110.

[11] Sentencia T-295/99, cuyos argumentos en relación con los actos propios han inspirado posteriores pronunciamientos.

c) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas.

Como se aprecia, aunque formulados en términos diversos, existe coincidencia en el derecho comparado y en la doctrina respecto de los presupuestos que deben concurrir para aplicar las consecuencias del acto propio.

A continuación se analizarán someramente cada uno de ellos. Para ello, se determina dar cuenta de los presupuestos identificados por la Corte Constitucional de Colombia.

a) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz.

La conducta se entiende como el proceder de una persona en una relación jurídica. Puede tratarse de un acto o bien de un conjunto de actos que revelan una postura ante una situación jurídica, aunque se han analizado casos en que también el silencio puede obligar a un sujeto y exigirle luego coherencia con esa pasividad.

En lo que respecta a la relevancia jurídica, esto significa que no se trata de la realización de cualquier acto, sino de uno que sea trascendental, relevante; el alcance del acto que luego se pretende deshacer o contrariar debe ser inequívoco en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin duda alguna, una determinada situación jurídica.[12]

En efecto, los actos contra los que no es lícito accionar son aquellos que por su carácter trascendente, o por constituir convención, causen estado y diluciden inalterablemente la situación jurídica de su autor, o aquellos que vayan encaminados a crear y modificar o extinguir algún derecho.

No son actos trascendentes para esta doctrina, por ejemplo, una simple opinión o la simple manifestación de un propósito; se trata siempre de una actitud actual, no de un propósito futuro.

En relación con la posibilidad de rectificar la conducta, por ejemplo en caso de error, parte de la doctrina considera (en buena medida al estimar a la buena fe en su aspecto ético y no subjetivo), que si la conducta ha engendrado confianza en la contraparte ya no se puede rectificar con base en el principio de buena fe.

---

[12] López Mesa, Marcelo J., op. cit., p. 112.

Respecto del lapso que debe existir entre ambas conductas, cabe decir que necesariamente debe mediar un espacio de tiempo entre ellas, pues tratándose de conductas simultáneas se entiende que ambas forman una unidad, y así deben valorarse por los sujetos, quienes no deberían tener problema en entender que se trata de una contradicción que no genera confianza alguna.

b) Un comportamiento posterior contradictorio que afecta las expectativas que surgen del anterior.

La expresión-pretensión contradictoria encierra distintos matices: por un lado, es la emisión de una nueva conducta o un nuevo acto, por otro, esta conducta importa ejercer una pretensión que en otro contexto es lícita, pero resulta inadmisible por ser contradictoria con la primera.

Pretensión que es aquella conducta realizada con posterioridad a otra anterior y que está dirigida a tener de otro sujeto un comportamiento determinado. Lo fundamental de la primera conducta es la confianza que suscita en los demás, en tanto que lo esencial de la pretensión contradictoria es el objeto perseguido.[13]

c) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas.

Es necesario que las personas o centros de interés que intervienen en ambas conductas (como emisor o como receptor) sean los mismos.

El emisor o sujeto activo es la persona que ostenta la titularidad de un derecho subjetivo, quien se ha comportado de determinada forma y posteriormente pretende ejercer su derecho en forma contradictoria a esa conducta. El sujeto pasivo o receptor es el destinatario de la pretensión y del derecho subjetivo.

Límites.

López Mesa[14] comenta que en el Derecho Colombiano se ha declarado inaplicable la doctrina de los actos propios a casos tales como:

---

[13] López Mesa, Marcelo J, artículo intitulado La doctrina de los actos propios, publicada en la Revista Vniversitas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), julio 2009, No.119, p. 197.

[14] López Mesa, Marcelo J. La doctrina de los actos propios. Doctrina y Jurisprudencia. Ed. Reus, Buenos Aires, 2005, p. 175.

a) La revisión de un derecho al que la Constitución le confiera el carácter de irrenunciable.

b) Aquellos en que el primer acto verse sobre una cuestión de orden público, indisponible para las partes (por ejemplo, la filiación).

c) Aquellos donde existieran comprometidos intereses de menores, cuya tutela es la finalidad permanente de toda clase de procesos.

d) Aquellos en que se debatan aspectos vinculados a garantías instituidas en resguardo de derechos fundamentales.

e) Aquellos casos en que la aplicación de la doctrina de los actos propios contravenga una norma expresa o un régimen jurídico específico (como el pago de lo indebido).

f) Cuando el acto vinculante fuera un acto prohibido por la ley.

g) Cuando por cualquier motivo, la índole de derechos debatidos los colocara fuera del ámbito de disponibilidad de las partes.

Otros límites establecidos por la doctrina y la jurisprudencia comparadas, son los siguientes:

h) No se aplica cuando el cambio lo autoriza la misma ley, la que establece la posibilidad de variar. Ejemplos de esta limitación sería la ampliación de demanda o la revocación del mandato o del testamento.

i) No rige respecto de actos inconfirmables.

j) No tiene vigencia si la primera conducta es ilegal o ineficaz en virtud de un vicio (error, dolo, violencia, fuerza).

Los Códigos Civiles establecen un sistema de anulación de los actos viciados por lo que no es posible que indirectamente, por aplicación de esta doctrina, se convaliden actos viciados.

La carga de la prueba de la existencia del vicio la tendrá la parte que pretende hacer valer la conducta contradictoria desde el momento en que acciona o presenta su gestión, pues de lo contrario la prueba podría ser presentada demasiado tarde considerando que esta doctrina, como se verá, admite aplicación de oficio.

Buena parte de la doctrina ha adoptado una posición marcadamente objetivista al prescindir del aspecto intencional (buena fe ética u objetiva), posición que asigna primacía a la protección de la confianza suscitada, por lo que desecha la invocación de los vicios que pueda tener un acto, especialmente si se trata del error, excepto cuando la otra parte hubiera sabido o debido saber de la existencia de aquél.

En efecto, para la concepción ética de la buena fe (diversa a la psicológica para la que la buena fe siempre es una creencia o ignorancia), el sujeto que opera en virtud de un error o de una situación de ignorancia no es merecedor de la protección o de la exoneración de la sanción que se otorga al de buena fe, si su comportamiento no es valorado como el más adecuado conforme a la diligencia socialmente exigible. Por eso, habrá que investigar la medida en que fue o no culpable de su error o de su ignorancia.[15]

Características.

a) No se trata de una regla absoluta. No se admite aplicación, rígida, automática de la regla, pues debe valorarse cada caso.

b) Es una doctrina de aplicación residual, para cuando no hay norma expresa que regula el caso. Es decir, no corresponde aplicar la doctrina cuando la ley regula una solución expresa para la conducta contradictoria, y la permita o la impida.

c) No debe aplicarse cuando sea innecesaria o improcedente. La aplicación de la máxima requiere de un estricto control judicial para evitar excesos en la aplicación de la teoría.

d) Se aplica respecto de conductas judiciales y extrajudiciales.

Esta doctrina requiere de la existencia de un proceso para la aplicación de la regla. Sobre esta necesidad, Diez-Picazo(16) señalaba que "para nuestra jurisprudencia la aplicación de la regla que impide venir contra los actos propios presupone siempre una situación procesal … es en el proceso donde no se puede venir contra los actos propios".

El que esta doctrina tenga aplicación exclusivamente dentro de un proceso de carácter jurisdiccional no significa que el acto que se pretende con-

[15] López Mesa, Marcelo J., op. cit., pp. 187 y 188. Citando las ideas de Diez-Picazo.

tradecir se haya suscitado dentro de un proceso, pues no existe inconveniente en que el mismo provenga de otro ámbito, sino únicamente que se requiere de un proceso para invocar la violación de la obligación de coherencia, generalmente como defensa.

e) Su aplicación no requiere de la existencia de una norma expresa, pues deriva del principio de buena fe.

f) Puede y debe ser aplicada de oficio por el juzgador.

Diversos tribunales y autores han considerado que esta doctrina puede aplicarse de oficio por Jueces y tribunales por la vía del principio *iura curia novit*. Basta con que la parte haya denunciado, así sea de manera implícita el cambio de actitud de la contraparte para que proceda la aplicación de oficio de la regla.[17]

g) Es factible incurrir en la contradicción al formular una acción o una excepción, es decir, es indiferente la posición que se tenga en el proceso.

La doctrina de los actos propios puede ser utilizada por cualquiera de las partes sea que se asuma una posición activa o pasiva, pues no se trata de una excepción en estricto sentido procesal, sino de una defensa en general.

Efectos de la doctrina de los actos propios.

El efecto fundamental que provoca la aplicación de la doctrina es la irrelevancia de la conducta contradictoria con un acto anterior, esto es, que el acto posterior contradictorio no se tiene en cuenta y se está a la primera manifestación.[18]

Dicho más sencillamente, la sanción es no tomar en cuenta el acto contradictorio.

Empero, parte de la doctrina sostiene que una actuación contraria al principio de buena fe debe tener necesaria repercusión en el tema de las costas.

---

[16] Diez-Picazo Ponce de León, Luis, La doctrina de los propios actos: un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ed. Bosch, Barcelona, 1963, pp. 188 y ss. y 193.
[17] López Mesa, Marcelo J., op. cit., p. 148.
[18] Ídem, p. 147.

Algunos ejemplos procesales en los que se ha aplicado la doctrina de los actos propios.

De inicio, es pertinente comentar que la doctrina en análisis ha sido utilizada en las siguientes ramas del derecho: civil, penal, laboral, administrativo y tributario.

Inclusive, cabe señalar que ha sido aplicada de manera frecuente en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.[19]

El Tribunal Supremo de España[20] ha admitido la vigencia procesal de la citada doctrina en multitud de supuestos como:

a) La impugnación de la legitimación del actor, admitida en un pleito anterior.

b) La falta de competencia del tribunal cuando tácitamente se asume la misma al no denunciarse el vicio procesal mediante una cuestión de competencia.

c) La solicitud de una prueba en segunda instancia cuando no fue pedida en la primera o lo fue, pero no se recurrió su denegación.

d) La formulación de nulidades procesales contra actuaciones consentidas sin plantear contra ellas los recursos legalmente previstos.

e) La negación en fase de recursos, de los hechos admitidos en la instancia.

f) La solicitud del ejecutado de sustituir un bien trabado en el embargo en el que estuvo presente, si no la hizo valer en la diligencia respectiva.

---

[19] Por ejemplo, en el caso Neira Alegría y otros, resuelto el once de diciembre de mil novecientos noventa y uno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en el párrafo 29, lo siguiente: "De lo expuesto surge, pues, que el Perú sostuvo el 29 de septiembre de 1989 que las instancias internas no se habían agotado en tanto que, un año después, 24 de septiembre de 1990, ante la Comisión y ahora, ante la Corte, afirma lo contrario. Según la práctica internacional cuando una parte en un litigio ha adoptado una actitud determinada que redunda en beneficio propio o en deterioro de la contraria, no puede luego, en virtud del principio del estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera. Para la segunda actitud rige la regla de *non concedit venire contra factum proprium*."
Cabe señalar que el principio de estoppel es el equivalente anglosajón de la doctrina del acto propio.

[20] Picó I Junoy, Joan, op. cit., p. 114.

En nuestro régimen jurídico, algunos de los anteriores no son casos de aplicación de la citada doctrina, puesto que existen normas jurídicas expresas que regulan esas situaciones.

La doctrina del acto propio en el Derecho Mexicano.

Como se ha abordado, la teoría de los actos propios es una derivación directa del principio de la buena fe.

En la especie se tiene que los principios generales del derecho y manifestaciones concretas de éstos en los distintos ámbitos del derecho son ideas fundamentales que informan el derecho positivo contenido en las leyes y costumbres y, en última instancia, aquellas directrices que derivan de la justicia tal como se entiende por el ordenamiento jurídico.

Así, las funciones de los principios generales del derecho se suelen destacar fundamentalmente dos: interpretativa e integradora.

En la función interpretativa de los principios, la aplicación de la normas sólo puede hacerse coherentemente mediante principios generales.

Mientras que en la función integradora, los principios adquieren una más precisa significación normativa, adecuada a la situación enjuiciada, siendo esta última la más difícil de admitir en un sistema legislado.

En relación a esta última función, se suele afirmar que en toda realidad jurídica encontramos que detrás de cada norma existe un principio general y que ellos representan la forma de ingreso al sistema jurídico de los valores y convicciones éticas básicas.

Luego, se debe entender que en el derecho mexicano, el principio de buena fe que rige a la teoría del acto propio, se encuentra inmerso dentro del artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal pues en dicho numeral el legislador estableció: "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley ..." por lo que es en base a la buena fe que el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones por lo que se le prohíbe ir contra actos anteriormente aceptados. Ello se advierte de los siguientes criterios judiciales:

La tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y cinco, Volúmenes 193-198, Cuarta Parte, correspondiente a la Séptima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, de rubro y texto:

"CONTRATOS. INAPLICABILIDAD DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.—El artículo 1796 del Código Civil del Distrito Federal, supletoriamente aplicado, siguiendo el sistema rígido de los contratos, acorde con el principio relativo a los efectos de la declaración de voluntad, dispone que aquéllos obligan a las partes al exacto cumplimiento de las prestaciones expresamente pactadas, y además, a las consecuencias que de los mismos se deriven, según su naturaleza, conforme a la buena fe, al uso o a la ley, precepto que, en esas condiciones, no deja lugar a su interpretación a fin de aplicar la teoría de la imprevisión en razón de esa buena fe, que obviamente constituye un principio general de derecho, pues precisamente, con base en ella, el obligado debe conducirse como persona consciente de su responsabilidad en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, cualquiera que resulte la magnitud de su contenido, aun cuando sobrevengan acontecimientos que no se previeron o no pudieron preverse y que la modifiquen, sin que ello impida, por otra parte, que de existir causas imprevisibles que alteren fundamentalmente la economía de un determinado grupo social, no apreciado por las partes, se modifiquen las condiciones de los contratos relativos, mediante disposiciones de carácter general."

Así también apoya lo anterior la tesis I.8o.C.251 C, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil sesenta y uno, Tomo XVIII, julio de 2003, correspondiente a la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de contenido:

"CONTRATOS BILATERALES, BUENA FE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS.—No basta cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas por uno de los contratantes para que se justifique el de la otra parte, sino que es menester que aquél sea de tal importancia que deje o sea capaz de dejar insatisfecho el interés del acreedor, atendiendo a la interdependencia funcional de las prestaciones correlativas; así lo exige el principio de buena fe en el cumplimiento del contrato que establece el artículo 1796 del Código Civil para el Distrito Federal, pues si los contratos desde que se perfeccionan obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, esta misma regla conduce a estimar inadmisible la pretensión de que se exima del cumplimiento a una de las partes, cuando el incumplimiento del otro contratante no es de importancia, toda vez que ello implicaría un ejercicio abusivo de ese

derecho por contrariar los fines que la ley tuvo en cuenta al reconocerlo –el de preservar el sinalagma contractual– y por exceder los límites impuestos por la buena fe."

Así, la buena fe con que se deben conducir las partes de un contrato y que se encuentra prevista en el artículo 1796 referido constituye un ingrediente imprescindible en la vida jurídica, por lo que debe entenderse conlleva la fidelidad a la promesa emitida, la lealtad a la palabra dada o, en fin, el sometimiento a la palabra empeñada, la que se manifiesta con toda su fuerza en los llamados contratos de buena fe.

Aunado a ello, puede señalarse que el principio jurídico de la buena fe exige un comportamiento coherente con la confianza suscitada por los actos propios, de lo cual se desprende que infringe la buena fe quien con el ejercicio de su derecho se pone en desacuerdo con su propia conducta anterior, en la cual confía la otra parte y que siempre que exista entre determinadas personas un nexo jurídico, éstas están obligadas a no defraudar la confianza razonable del otro, tratando de comportarse tal como se puede esperar de una persona de buena fe.

De esta forma, como se señaló, se suele exponer la doctrina de los actos propios como una de las expresiones del principio general de la buena fe, esto es, como una derivación necesaria e inmediata del principio general de la buena fe que obliga a una conducta leal, honesta, confiable y que encuentra apoyo en la moral y que se manifiesta en el deber de sometimiento a una conducta ya expresada por el sujeto en sus anteriores actuaciones, con lo que se evita así la agresión a un interés ajeno, que su cambio provocaría.

Ante ello, la teoría del acto propio basada en el principio de buena fe implica una limitación al ejercicio de los derechos que se relaciona con una idea ya expresada en relación con la consideración por parte del derecho del interés de la comunidad por sobre el interés individual.

Ahora bien, se distinguen en doctrina dos especies distintas de la buena fe:

La buena fe-lealtad (también llamada objetiva).

La buena fe-creencia (también llamada subjetiva).

Las principales aplicaciones que tiene la buena fe en nuestro derecho positivo:

a) Contratos. El artículo del Código Civil establece que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, para lo cual deben obrar con cuidado y previsión.

Buena fe en la celebración. Esto impone a las partes la obligación de hablar claro. Es por ello que los tribunales tienen decidido que las cláusulas oscuras no deben favorecer al autor de la declaración, principio especialmente importante en los contratos con cláusulas predispuestas o de adhesión.

Buena fe en la interpretación del acto. Esto significa que los hombres deben creer y confiar en que una declaración de voluntad surtirá en un caso concreto sus efectos usuales, los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos iguales.

Finalmente, la norma que comentamos exige también buena fe en la ejecución del contrato.

Es siempre el principio de que los contratantes deben obrar como personas honorables y correctas.

b) Abuso del derecho. Es prohibido por la ley el ejercicio abusivo de los derechos, pues ese abuso es contrario a la buena fe con que se debe actuar en la vida social.

c) Teoría de la imprevisión. Los contratos conmutativos bilaterales y en los unilaterales de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. Y es que la buena fe en la ejecución del contrato se opone a que pretenda hacérselo valer rígidamente cuando las circunstancias en las cuales se celebró han variado sustancialmente, tornándolo injusto.

d) Teoría de los actos propios. De acuerdo con esta teoría, nadie puede asumir en sus relaciones con otras personas, una conducta que contradiga otra suya anterior, cuando ésta haya despertado una legítima confianza en esas personas de que mantendrá una línea coherente con sus propios y anteriores actos. Es también una aplicación de la buena fe–lealtad, también llamada buena fe objetiva pues no se puede defraudar la confianza puesta en una conducta anterior jurídicamente relevante.

Algunas de las principales aplicaciones de este concepto en nuestro derecho positivo, son las siguientes:

a) Teoría de la apariencia. De acuerdo con un viejo principio de origen romano y receptado en nuestro derecho, nadie puede transmitir un derecho mejor ni más extenso del que se posee. Sin embargo, ocurre a veces que una persona es titular aparente de un derecho y que sobre la base de este título, lo transmita a un tercero de buena fe. La aplicación estricta del aquel principio conduciría a privar a este tercero de lo que ha adquirido de buena fe, lo que es injusto. La ley lo protege.

Veamos algunos casos. Ante todo, el del heredero aparente. Sucede a veces que una persona obtiene una declaratoria de herederos en su favor o que presenta un testamento en el cual es designado heredero. Enajena un bien del haber hereditario a un tercero de buena fe. Luego aparece otro heredero con mejor derecho (sea porque prueba un vínculo con el causante que desplaza al anterior, sea porque presenta un nuevo testamento que designa otro heredero).

Es evidente que quien anteriormente fue declarado heredero, no tenía en realidad ese carácter, por lo cual no podía enajenar un bien de la sucesión. Pero sería injustísimo privar de su derecho a quien ha adquirido el bien confiado en el título que ostentaba el heredero aparente. Bien entendido que este adquirente para ser protegido por la ley, debe ser de buena fe, es decir, ignorar que existía otro heredero con mejor derecho que el del aparente.

Lo mismo ocurre con los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser propietario en virtud de un acto anulado.

Supongamos que una persona ha adquirido un inmueble valiéndose de dolo para hacerse transmitir el dominio de su anterior propietario. El nuevo dueño inscribe su título en el Registro de la Propiedad. Pero luego, el enajenante promueve una acción de nulidad y se declara judicialmente nula dicha transmisión. Sin embargo, mientras el bien estaba a nombre del adquirente doloso, lo ha vendido a un tercero de buena fe y a título oneroso, que ha confiado en las constancias del Registro de la Propiedad. La ley lo protege, dejando a salvo su derecho contra la posible reivindicación del dueño.

Otro caso de apariencia es el del matrimonio que ha sido anulado; la anulación no afecta los derechos adquiridos por terceros que de buena fe

hubieran contratado con los cónyuges, ignorando que el matrimonio adolecía de un vicio de nulidad.

La nulidad de un acto otorgado por un demente, esté o no interdicto, no puede hacerse valer contra un contratante de buena fe, si la demencia no era notoria.

También se aplica la idea de la apariencia en el caso del mandatario cuyo mandato ha cesado por revocación, fallecimiento o incapacidad sobreviniente del mandante; si los terceros que han contratado con el mandatario ignoraban sin culpa la cesación del mandato, el contrato será válido respecto del mandante y de sus herederos.

Se declaró aplicable la teoría de la apariencia cuando las circunstancias del caso hacen razonable suponer la existencia de un mandato (como ocurre si el que contrató a nombre de otro, utiliza habitualmente sus oficinas, tiene acceso a su documentación y utiliza sus papeles), puesto que una razón de seguridad jurídica obliga a proteger al tercero de buena fe que creyó en la existencia del mandato.

b) Matrimonio nulo o anulado. Si el matrimonio nulo o anulado se contrajo de buena fe por ambos cónyuges, produce todos los efectos del matrimonio válido hasta el día que se declare la nulidad. Si hubo buena fe de uno sólo de los cónyuges, el matrimonio producirá todos los efectos del matrimonio válido, pero sólo respecto del cónyuge de buena fe. El cónyuge de buena fe puede revocar las donaciones que por causa del matrimonio hizo al de mala fe. En cuanto a la partición de los bienes adquiridos durante el matrimonio, la ley le confiere al cónyuge de buena fe una triple opción: a) o bien puede optar por la conservación por cada uno de los cónyuges de los bienes por él adquiridos o producidos antes y después del matrimonio; b) o bien puede liquidar la sociedad dividiendo por mitades los bienes gananciales sin consideración a quien los produjo y aunque el cónyuge de buena fe no hubiera producido ninguno; c) o bien puede dividir los bienes en proporción a los aportes que cada uno haya efectuado, como si se tratara de la liquidación de una sociedad de hecho.

Y, desde luego, si el matrimonio fuere contraído de mala fe por ambos cónyuges no producirá efecto civil alguno.

c) Aplicaciones en materia de derechos reales. Las aplicaciones del principio de la buena fe en materia de derechos reales, son numerosísimas.

Por lo pronto, la posesión de buena fe de una cosa mueble crea en favor del que la posee la presunción de tener la propiedad de ella y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiera sido robada o perdida.

En materia de usucapión de bienes muebles, si el poseedor es de buena fe y a justo título, la adquisición del dominio se produce a los diez años; en cambio, si es de mala fe, el plazo de la usucapión es de veinte años.

En cuanto a los frutos percibidos como consecuencia de la posesión de una cosa, el poseedor de buena fe los hace suyos, en tanto que el de mala fe debe al dueño no sólo los frutos percibidos, sino también los que por su culpa dejó de percibir.

El poseedor de buena fe tiene derecho a que se le paguen los gastos hechos en mejoras necesarias o útiles; el de mala fe tiene derecho a que se le paguen estas últimas sólo en la medida de que hayan aumentado el valor de la cosa.

El poseedor de buena fe no responde de la destrucción total o parcial de la cosa ni por los deterioros de ella, aunque fueran causados por hechos suyos, sino hasta la concurrencia del provecho que hubiera obtenido y sólo está obligado a entregar la cosa en el estado en que se halla. En cambio, el poseedor de mala fe responde por la ruina o deterioro de la cosa, aunque hubiere ocurrido por caso fortuito, si la cosa no hubiere perecido o deteriorado igualmente estando en poder del propietario.

Idea que se puede advertir de diversos criterios emitidos por nuestro Máximo Tribunal, a saber:

En la Quinta Época del citado *Semanario Judicial de la Federación*, la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, emitió el siguiente criterio:

"CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES, PRESUNCIONES DERIVADAS DE LA.—Siendo la buena fe base inspiradora de nuestro derecho, debe serlo, por tanto, del comportamiento de las partes en todas sus relaciones jurídicas y en todos los actos del proceso en que intervengan, y siendo la conducta procesal de éstas elemento básico para la resolución de los negocios judiciales, los jueces deben tomarla en cuenta para derivar de ella, en la

averiguación de la verdad, las presunciones que lógica y legalmente se deduzcan del mismo."[21]

Posteriormente, en la Sexta Época del *Semanario Judicial de la Federación*, esa misma Sala sustentó los siguientes criterios, el primero aislado y el segundo jurisprudencial.

"CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES.—La conducta procesal es un elemento básico para la resolución de los negocios judiciales, puesto que proporciona elementos objetivos de convicción al juzgador."[22]

"CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES.—La conducta procesal de las partes es un dato objetivo de convicción para el juzgador, que debe tomarse en cuenta, sin que por ello se violen las garantías individuales."[23]

En la Séptima y Octava Épocas del *Semanario Judicial de la Federación* se publicaron las siguientes dos tesis aisladas, mismas que hicieron referencia expresa al brocardo de mérito (aunque una de ellas con un error).

"CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES.—La jurisprudencia número 101 visible a páginas 278, de la Cuarta Parte del último *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación*, con el rubro 'Conducta procesal de las partes', sanciona como regla de derecho el aforismo jurídico '*venire contra cactum propium*', de no ser lícito a nadie ir, ni obrar, contra sus propios actos, en el caso actos de reconocimiento, que implican renuncia a la defensa o excepción hecha valer en la litis de la que emana el acto reclamado, por carecer el reo de aptitud legal para oponerla, dado el acto de reconocimiento; y al no estimarlo así el tribunal responsable infringe el expresado principio que veda esa inconsecuencia jurídica; pues dicha regla de derecho establece un límite del ejercicio de los derechos subjetivos o de las facultades jurídicas, impuesto por la

[21] Tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Quinta Época del *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo CXXXI, visible en la página 179.
[22] Tesis aislada emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época del *Semanario Judicial de la Federación*, Volumen LXXXIV, Cuarta Parte, visible en la página 43.
[23] Jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sexta Época, *Apéndice* 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 88.

buena fe, conforme al cual se decreta la inadmisibilidad de toda pretensión, contradictoria con el sentido objetivo de la conducta anterior del titular."[24]

"CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES.—La jurisprudencia número 467, visible a páginas 812 de la Segunda Parte del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1988, con el rubro que se indica, sanciona como regla de derecho el aforismo jurídico '*Venire contra actum propium*', de no ser lícito a nadie ir, ni obrar, contra sus propios actos, en el caso actos de reconocimiento, que implican renuncia a la defensa o excepción hecha valer en la litis de la que emana el acto reclamado, por carecer el reo de aptitud legal para oponerla, dado el acto de reconocimiento; y al no estimarlo así el tribunal responsable infringe el expresado principio que veda esa inconsecuencia jurídica, pues dicha regla de derecho establece un límite del ejercicio de los derechos subjetivos o de las facultades jurídicas, impuesto por la buena fe, conforme al cual se decreta la inadmisibilidad de toda pretensión, contradictoria con el sentido objetivo de la conducta anterior del titular."[25]

Ya en la Novena Época del citado medio de difusión, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustentó el siguiente criterio en el que vislumbró la posibilidad de analizar la conducta procesal de las partes y sancionar los actos contradictorios.

"PRESUNCIONES DERIVADAS DE LA CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES.—La conducta procesal de las partes es un elemento básico, puesto que proporciona al juzgador elementos objetivos de convicción que deben tomarse en cuenta para derivar de ellas las presunciones que lógica y legalmente se deduzcan; por tanto, si se advierte que durante el juicio alguna de las partes obró dolosamente, al afirmar hechos o circunstancias de los que posteriormente se contradice, deberá ponderarse esa conducta contradictoria, la cual es un dato objetivo que puede utilizarse como argumento de prueba, el cual, adminiculado con el resto del material probatorio y las circunstancias del caso, será de utilidad para averiguar la verdad de los hechos controvertidos. La apreciación conjunta de estos elementos determinará el grado de probabi-

---

[24] Tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la Séptima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, visible en la página 164.

[25] Tesis aislada emitida por el citado Tribunal Colegiado, publicada en la Octava Época del *Semanario Judicial de la Federación*, Tomo VIII, agosto de 1991, visible en la página 165.

lidad del hecho que se pretende demostrar, en la inteligencia de que el hecho presumido debe inferirse, de manera lógica, de la conducta procesal."[26]

Hasta aquí lo relativo a las cuestiones generales de la doctrina de los actos propios.

Pues bien, a efecto de demostrar que la conducta del banco infringió la doctrina de los actos propios y, por tanto, que el estado de cuenta que allegó al juicio, diverso al que envió al domicilio de la acreditada no debe ser tomado en cuenta, a continuación se confrontarán los hechos del caso concreto con los presupuestos necesarios para la aplicación de dicha doctrina.

a) Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz.

En cumplimiento a la obligación establecida en la cláusula décima segunda del contrato cuyo cumplimiento demandó la parte actora, ********** le envió a ésta un estado de cuenta correspondiente al pago número doscientos cuarenta de doscientos cuarenta, relativo al periodo que va del uno al treinta de abril de dos mil nueve, en el que se consignó como cantidad a pagar **********.

En dicho documento todos los conceptos descritos, salvo los relativos a intereses y pólizas de vida y el de total del adeudo, aparecen en ceros.

Al actuar de esta manera, el banco definió su posición jurídica en relación con el crédito a cargo de la acreditada, al reconocer que el pago final únicamente debía efectuarse por el monto antes indicado, pues generó en ésta la certeza de haber culminado con su obligación crediticia y con ello, haberse hecho acreedora al beneficio de liquidación del crédito ante el pago puntual del principal y los intereses ordinarios, de conformidad con la cláusula octava del contrato de mérito.

Lo anterior, toda vez que el documento denominado estado de cuenta que se envía periódicamente a los clientes de los bancos es un instrumento que define las obligaciones financieras adquiridas por los usuarios, cuyo contenido merece toda la credibilidad pues mantiene la información respecto del crédito correspondiente.

---

[26] Tesis aislada I.4o.C.69 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XX, agosto de 2004, visible en la página 1653.

En efecto, se trata de documentos que deben reputarse veraces y exactos pues contienen toda la información que el cliente necesita saber para determinar su estado crediticio, información en la que confía plenamente y a partir de la cual establece su nivel de endeudamiento y la posibilidad de realizar los respectivos pagos.

La mera circunstancia de que quien emite el estado de cuenta sea una institución financiera reconocida no sólo en el país, sino internacionalmente, pues se está en presencia de una de las corporaciones financieras más grande del mundo, hace suponer que antes de enviar un estado de cuenta a un cliente, sus trabajadores se tomaron la molestia de realizar un análisis cuidadoso que permitiera asegurar que la información que contiene corresponde a un procedimiento serio y que lo allí consignado reflejaba la realidad de la obligación financiera, desde luego emanado de los controles y registros electrónicos con que cuenta.

En consecuencia, es claro que el banco al remitir al domicilio de ********** un estado de cuenta correspondiente al último pago del crédito en el que estableció que la cantidad total que se debía cubrir era la de ********** y que no existía cantidad a amortizar, pues el espacio correspondiente, así como el de otros conceptos aparecía en ceros, asumió una posición jurídica concreta frente al crédito hipotecario de la accionante y así se lo comunicó y creó en ella una expectativa sobre el estado actual de su deuda que la llevó a pensar por una parte, que salvo la cantidad ahí establecida no existía ninguna otra que debiera satisfacer y, por otra, que ante el cumplimiento puntual del capital principal y los intereses ordinarios se había hecho acreedora del beneficio establecido en la cláusula octava del contrato base de la acción, esto es, verse liberada de pagar el saldo insoluto restante, el cual ascendía a la no insignificante cantidad de **********.

b) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción –atentatorio de la buena fe– existente entre ambas conductas.

Como se ha relatado, tiempo después de que la institución financiera le envió a su cliente, aquí quejosa, el estado de cuenta correspondiente al último pago (doscientos cuarenta de doscientos cuarenta) con el que como se indicó previamente, sentó su postura sobre el estado del crédito, el banco se retractó y a través de un despacho de cobranza comunicó a esta última que el crédito estaba vigente; que presentaba saldo pendiente por pagar; que estaba en mora y que se le hacía una cordial invitación para cumplir su obligación de pago.

Posteriormente, la quejosa, al acudir directamente a las oficinas del banco, fue informada por personal de éste que de acuerdo a su sistema su crédito presentaba un retraso en el pago y que por tal motivo ya no era acreedora del beneficio de liquidación del mismo.

De esta manera, es claro que el banco varió unilateralmente y sin consulta previa a la acreditada, su posición jurídica y le impuso una carga económica que ésta consideraba extinta.

Sin que se alcance a entender la postura del banco cuando afirma que el estado de cuenta que contiene un monto mayor al efectivamente pagado por la quejosa emana de su sistema, porque entonces cabría preguntarse ante la notable discrepancia de dónde derivan los que periódicamente envía a sus clientes.

c) La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas.

Por cuanto hace al cumplimiento del último de los requisitos para considerar que se desconoció el principio de respeto al acto propio, este órgano colegiado encuentra que hay plena coincidencia de los sujetos intervinientes, pues el banco generó las dos comunicaciones opuestas en su contenido y separadas en el tiempo, la primera en la que consignó una cantidad que la acreditada pagó y otra, en la que aparece como cantidad total a pagar la de **********, es decir, ********** más que el monto satisfecho.

En efecto, ********** generó un acto propio que creó una situación jurídica concreta respecto de ********** al imponerle unas obligaciones en relación con su crédito; luego, ésta, en su carácter de usuario financiero acató dichos actos con unas consecuencias jurídicas y económicas muy concretas (extinción del crédito con motivo del beneficio de liquidación) y, finalmente, desconoció sus propios actos y los efectos que éstos generaron y le impuso a esta última una posición jurídica distinta a la inicialmente asumida (mora en el pago y obligación de cubrir el saldo insoluto).

Conforme a lo anteriormente relatado, es claro que en el caso justiciable concurren los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para considerar que la institución financiera en cita vulneró en perjuicio de la quejosa la doctrina de los actos propios.

Por otra parte, en relación con los requisitos y características de esa doctrina, cabe señalar que en el caso justiciable están presentes y por cuanto hace a sus límites, no se aprecia la concurrencia de alguno de ellos.

No pasa inadvertido por cuanto hace a estos últimos, que al tratar ese tema se refirió como uno de ellos la existencia de vicios del consentimiento, entre los que se encuentra el error.

No obstante, conviene señalar que en el caso la institución financiera nunca expresó ni reconoció que su actuar constituyera un error y mucho menos ofreció prueba para acreditar ese extremo, sino que sólo se limitó a aseverar categóricamente, sin negar el hecho de haber enviado previamente a la actora un estado de cuenta con datos distintos, que su sistema indicaba que la acreditada no satisfizo a cabalidad el último pago del crédito, pues lo efectuó por **********, cuando en realidad tenía que pagar **********, con las consabidas consecuencias que ello traía consigo.

Con esto, incurre el banco en la postura irracional de que sea un sistema informático la fuente de los dos saldos distintos plasmados en sendos estados de cuenta; máxime que esos sistemas de gestión automatizada de datos o tecnologías de la información, son únicamente procesos de programación, que deben corresponder fielmente a la realidad y generar la exigencia de responsabilidades a quien lo hace constar; esto es, que los datos reportados no tienen en sí mismos calidad como verdaderos y lo más que permite la regulación de los estados financieros, es una presunción legal de verdad de sus contenidos, como en el caso de los artículos 68 y 100 de la actual Ley de Instituciones de Crédito.

Además, la sanción que acarrea el proceder del banco demandado, resulta desproporcional al representar que una falta de pago por **********, a la que él mismo dio lugar, genera a la cliente una responsabilidad por **********.

Asimismo, como se indicó, la doctrina de los actos propios se basa más en la concepción ética y objetiva de la buena fe, por lo que aunque se considerara que el Banco cometió un error ello no lo haría merecedor de la exoneración de la sanción que se otorga a quien actúa de buena fe, porque su comportamiento no puede ser valorado como el más adecuado conforme a la diligencia socialmente exigible, cuando como se indicó previamente, es manifiesto que su personal no realizó un análisis cuidadoso que permitiera asegurar que la información contenida en el estado de cuenta que le remitió a ********** reflejaba la realidad de su obligación financiera, cuando es innegable que debe contar con toda la infraestructura técnica y humana requerida para ello.

En todo caso, ante la existencia de un error, la conducta que podría reputarse como apropiada y a partir de la cual podría considerarse que el

banco cumplió con la diligencia socialmente exigible, era obtener el consentimiento de su cliente para cambiar la posición inicialmente fijada por ella y, de no lograrlo, acudir ante la jurisdicción ordinaria para corregir allí su equivocación, pues de no proceder de esa forma, que es lo que en el caso justiciable aconteció, la entidad financiera le impuso a la aquí quejosa las consecuencias negativas de su propia equivocación, con lo que desconoció el principio en cita y los valores que lo irradian, es decir, la confianza, la lealtad y la honestidad que debían imperar en su relación comercial.

Vale la pena señalar que por tratarse del último pago mensual (de doscientos cuarenta) que actualizaría la condición para que la acreditada se hiciera acreedora del beneficio de liquidación total del saldo insoluto por el transcurso del plazo máximo del crédito y el pago puntual del principal y los intereses ordinarios, el envío de dos estados de cuenta con información diversa puede llegar a considerarse en la posición dominante que en la relación comercial tiene el banco respecto de su cliente, como un medio para evitar que éste disfrute los beneficios estipulados a su favor, aspecto que ante la más mínima posibilidad debe limitarse en pro no sólo de la seguridad jurídica de las partes, sino de la propia reputación de la entidad financiera.

En ese orden de ideas, si como se indicó, el efecto de la existencia de una infracción a la doctrina en estudio es no tomar en cuenta el acto contradictorio, esto es, el segundo estado de cuenta que la demandada remitió al domicilio de la actora en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula décimo segunda del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, debe concluirse que la Sala responsable al tomarla en consideración en franca violación a la mencionada doctrina, cometió un error que trascendió al resultado de la valoración de los medios de convicción aportados por la enjuiciante, pues con base en esa documental de manera indebida demeritó su alcance demostrativo.

En efecto, de no haber tomado en cuenta el segundo estado de cuenta, es manifiesto que a las pruebas ofrecidas por la actora no sólo se les hubiera reconocido pleno valor probatorio sino también completo alcance demostrativo, con la repercusión que ello tiene respecto de la acción ejercitada.

En esas condiciones, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes:

1. Que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia impugnada.

2. Dicte una nueva sentencia en la que en aplicación de la doctrina de los actos propios, considere que el Juez de primera instancia no debió esti-

mar el estado de cuenta aportado por la parte demandada y, por tanto, que en esas condiciones, las pruebas ofrecidas por la actora tienen pleno valor probatorio y alcance demostrativo.

3. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho proceda.

En este orden de ideas, con apoyo en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala responsable para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación de la presente ejecutoria informe sobre el cumplimiento que dé a la misma, atento a la jurisprudencia I.3o.C. J/52, sustentada por este órgano colegiado, publicada en la página ochocientos cincuenta y nueve, del Tomo XXVIII, del mes de agosto de dos mil ocho, correspondiente a la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DE CARÁCTER JURISDICCIONAL, LA AUTORIDAD RESPONSABLE TIENE VEINTICUATRO HORAS PARA DEJAR INSUBSISTENTE EL ACTO Y DEBE DICTAR OTRA SENTENCIA DENTRO DEL PLAZO LEGAL QUE ESTABLEZCA LA LEY PROCESAL QUE RIJA SU ACTUACIÓN.—La Ley de Amparo establece el procedimiento de ejecución de una sentencia de amparo, según se advierte de sus artículos 104 a 113, sin embargo, no reguló el caso relativo a la forma y plazo en que debe cumplirse una ejecutoria de garantías relacionada con un acto jurisdiccional, ya que no se indica cuándo o en qué plazo debe dictarse una nueva sentencia por la autoridad judicial civil; sin embargo, no pueden estimarse aplicables, en forma directa, las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles en razón de ser supletorio de la Ley de Amparo, según el artículo 2o. de este último ordenamiento, porque no se trata de suplir la deficiencia de alguna institución procesal del juicio de garantías, en la medida en que el nuevo acto jurisdiccional debe regirse, en su caso, por la ley procesal que regula su emisión, que puede ser de carácter local o federal; sino de ponderar en razón de la naturaleza de control constitucional que se ejerce a través del juicio de amparo, que éste comprende diversos órdenes jurídicos en razón de los actos que están sujetos al mismo y, por ello, debe considerarse una integración del sistema jurídico que sea eficaz tanto para fijar el ejercicio óptimo de la función judicial como para que, llegado el caso, sea acorde con la observancia de una ejecutoria de amparo. Por esa razón, no puede soslayarse la existencia de diversos órdenes normativos que regulan de modo especial la forma en que debe emitirse un acto jurisdiccional y según sea uno de ellos el objeto de una ejecutoria de amparo, el cumplimiento referido constreñirá a la autoridad judicial de

inmediato a dejar sin efectos ese acto en el término de veinticuatro horas y deberá sujetarse para el dictado de la nueva resolución al plazo y forma que señale la ley procesal que lo rija. Por tanto, sólo en el caso de que la ley respectiva no contemple un plazo para la emisión del acto jurisdiccional, entonces, sí debe aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles ante una laguna normativa de la ley procesal que rija el acto. De acuerdo con lo anterior, tratándose de actos de autoridad jurisdiccional, el plazo de veinticuatro horas regulado en los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo es únicamente para que de inmediato deje insubsistente el acto reclamado, mientras que el pronunciamiento de la nueva sentencia o resolución en la que se purgue la violación que dio lugar a la concesión, debe hacerse dentro del plazo legal que para tal efecto le conceda la ley procesal que rija su actuación."

Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 76 a 80, 158, 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra el acto que reclamó de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia de diez de agosto de dos mil once, dictada dentro del **********.

SEGUNDO.—Requiérase a la Sala responsable, para que informe sobre el cumplimiento que dé a la presente ejecutoria en términos de lo precisado en la parte final del último considerando de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable de su origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Neófito López Ramos y Benito Alva Zenteno, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que fue ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en el artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE. La buena fe se define como la creencia de una persona de que actúa conforme a derecho; constituye un principio general del derecho, consistente en un imperativo de conducta honesta, diligente, correcta, que exige a las personas de derecho una lealtad y honestidad que excluya toda intención maliciosa. Es base inspiradora del sistema legal y, por tanto, posee un alcance absoluto e irradia su influencia en todas las esferas, en todas las situaciones y en todas las relaciones jurídicas. Ahora bien, a partir de este principio, la doctrina y la jurisprudencia han derivado diversas instituciones, entre las que por su importancia para la resolución de problemas jurídicos destaca la llamada doctrina o teoría de los actos propios, que deriva de la regla consignada en el brocardo que reza: *venire contra factum proprium, nulla conceditur*, la cual se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura al invocar hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en oposición con su conducta anterior y encuentra su fundamento en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada, la cual quedaría vulnerada si se estimara admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C. J/11 (10a.)

Amparo directo 614/2011. 8 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Amparo directo 183/2012. Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Amparo en revisión 85/2012. Ileana Fabiola Terán Camargo. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Amparo directo 237/2012. Mireya Leonor Flores Nares. 10 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Amparo en revisión 96/2014. Isaac Romano Metta. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Laura Díaz Jiménez, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Nashieli Simancas Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 11/2015. 11 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO. SECRETARIO: ROBERTO SÁENZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio de los agravios (revisión principal).

Sostiene el recurrente en el primer agravio de revisión que la resolución impugnada violó en su perjuicio los artículos 124, 143 y 144 de la Ley de Amparo, en virtud de que el Juez de Distrito en el acta que levantó con motivo de la audiencia incidental omitió considerar las pruebas que ofreció la parte tercera interesada, lo que se traduce en una violación manifiesta de la ley que le dejó en estado de indefensión y, por tanto, produce que tenga que reponerse el procedimiento.

Lo anterior dice es así, porque la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes en el incidente de suspensión constituye un elemento básico para integrar la garantía de audiencia, de manera tal que si no refirió las pruebas documentales que ofreció, ello contravino lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, que obliga al juzgador a recibir por su orden, las pruebas admitidas y desahogadas, y los alegatos por escrito, para lo cual debe hacerse una relación de las constancias de autos previamente a dictar la resolución incidental.

Por otra parte, alega que el Juez de Distrito violó en su perjuicio los artículos 217 y 221 de la Ley de Amparo, porque dentro de las pruebas que ofreció invocó una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le es obligatoria y no fue observada por el resolutor federal.

Precisa que ofreció como prueba de su parte las copias certificadas de la sentencia pronunciada en el recurso de revisión ********** por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la que se desprende que dicho órgano colegiado expuso la manera como debía fijarse la garantía para que surtiera efectos la suspensión de los actos reclamados, su monto y el tiempo por el que se debería otorgar en el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el

Distrito Federal promovido por el quejoso **********, contra actos del Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Distrito Federal y secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, consistente en la orden de arresto decretada en auto de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, dentro del expediente **********, lo cual fue desatendido por el juzgador federal ahora recurrido, por lo que es procedente que se revoque la resolución impugnada por medio del presente recurso de revisión.

Los argumentos antes sintetizados son infundados en parte y fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida en otra.

En efecto, contrario a lo que afirma el recurrente, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal sí acordó las pruebas que ofreció en el incidente y atendió a las mismas para fijar el monto de la garantía necesaria para que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión de los actos reclamados.

En el acta relativa a la audiencia incidental celebrada el doce de diciembre de dos mil catorce, el Juez de Distrito recurrido en relación con las pruebas ofrecidas por el recurrente y sus alegatos, acordó lo siguiente:

"… Acto seguido, el secretario hizo relación de todas y cada una de las constancias que obran en el incidente … Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta con las ofrecidas por el tercero interesado **********, consistentes en la copia certificada de la resolución de dieciocho de junio de dos mil ocho y dos de junio de dos mil catorce, dictadas por el Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el expediente ********** de su índice; copia certificada de la resolución de veintidós de mayo de dos mil catorce, emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el recurso de revisión **********, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial, con fundamento en el artículo 143, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas ofrecidas por el tercero interesado **********; consecuentemente, sin más pruebas que acordar, se cierra el periodo respectivo.

"Enseguida, se abre la etapa de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por el quejoso **********, en el escrito recibido el cuatro de los corrientes, registrado con el folio 26364 y por el tercero interesado **********, en su escrito recibido el once de los corrientes, registrado con el folio 27035. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo,

téngase por formulados los alegatos del quejoso y tercero interesado antes mencionado, los cuales serán tomados en cuenta al momento de emitir la presente resolución interlocutoria y sin más alegatos que acordar, se cierra esta etapa. Finalmente, sin promociones pendientes de acuerdos se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente interlocutoria …"

De la transcripción anterior se desprende que, contrario a lo que afirma el recurrente, el Juez de Distrito cumplió con lo dispuesto por los artículos 124, 143 y 144 de la Ley de Amparo, que disponen:

"Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

"El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

"En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración."

"Artículo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva.

"En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta ley, será admisible la prueba testimonial.

"Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal."

"Artículo 144. En la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, se dará cuenta con los informes previos; se recibirán las documentales que el órgano jurisdiccional se hubiere allegado y los resultados de las diligencias que hubiere ordenado, así como las pruebas ofrecidas por las partes; se recibirán sus alegatos, y se resolverá sobre la suspensión definitiva y, en su caso, las medidas y garantías a que estará sujeta."

Ahora bien, el recurrente afirma que el Juez de Distrito omitió analizar las pruebas que ofreció en el incidente e inaplicó a pesar de serle obligatorias, las jurisprudencias 1a./J. 95/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, enero de 2012, Tomo 3, página 2288, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", así como la 1a./J. 46/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 363 del Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, de rubro: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN."

Precisa que tal omisión descansó en el hecho de que el Juez de Distrito recurrido fijó una garantía menor a la que determinó el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión **********, así como también un tiempo menor de probable duración del juicio de amparo indirecto número **********.

Los argumentos antes sintetizados son fundados. En la sentencia recurrida se consideró que el quejoso fue condenado a pagar a los actores en el juicio natural la cantidad de **********, esta suma se obtiene de las resoluciones que exhibió el ahora recurrente, las cuales fueron dictadas en el juicio natural.

Tomando como parámetro la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación a veintiocho días, el juzgador federal fijó el monto de la garantía, apegándose al texto de las jurisprudencias que cita el recurrente, sin embargo, el cálculo del monto de la garantía y tiempo de duración del juicio constitucional tomando en consideración ambas instancias fue incorrecto por las razones que enseguida se exponen.

Este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en diversos precedentes ha indicado las operaciones y fórmulas para obtener el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión de los actos recla-

mados, tal como se puede apreciar en la tesis I.8o.C.8 K (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2423, de título y subtítulo siguientes:

"GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2288, de rubro: 'DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.', en relación con la fijación del monto de la garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, concluyó que para determinar el monto de los daños y perjuicios que pudieran originarse al tercero interesado con el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, debe atenderse a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), al constituir un indicador monetario que, a diferencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor que sólo refleja el menoscabo o depreciación del dinero, lo actualiza a valor real, ya que permite conocer tanto la pérdida promedio que acarrea para un individuo no tener bajo su dominio una determinada cantidad monetaria (daño), como el rendimiento que pudo originar la que se dejó de percibir (perjuicio), según las condiciones reales del mercado. En ese sentido, al fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión, no debe cuantificarse dos veces la indicada tasa, es decir, aplicar su valor al determinar por separado tanto el monto de los daños como el de los perjuicios que pudieran ocasionarse con la medida al tercero perjudicado, pues tal duplicidad sería contraria a los argumentos dados al emitir la citada jurisprudencia, conforme a los cuales en ese indicador monetario ya se encuentran reflejados tanto unos como otros. Ahora bien, para obtener el monto de la garantía, debe atenderse, en su caso, al valor de la condena decretada en el juicio de donde emane el acto reclamado. A dicha condena debe aplicarse la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, acorde con la jurisprudencia citada, por seis meses que es probablemente el periodo en que se resuelve el juicio de amparo indirecto en lo principal. De lo anterior se tiene que una vez determinada la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio mensual a veintiocho días que publica el Banco de México, la misma debe anualizarse, esto es, dicha tasa debe dividirse entre doce meses para obtener cuál es su monto mensual. El porcentaje que se obtenga debe multiplicarse por seis meses y ése será el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión."

El Juez de Distrito expuso que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio mensual aplicable era de 3.2928, esa cantidad la dividió entre doce meses para obtener el porcentaje anualizado de la tasa indicada, obteniendo que fue 0.2744, esa cifra la multiplicó por seis (meses, tiempo probable de

duración del juicio de amparo) y obtuvo que la tasa aplicable era de 1.64; acto seguido, realizando una regla de tres simple obtuvo que $ ********** (condena) multiplicados por 1.64 (TIIE mensual anualizada) y dividido el resultado entre cien, daba la cantidad de $ ********** (**********), determinando que ésa sería la garantía que debería exhibir el quejoso para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados.

A pesar de que las operaciones en principio parecían correctas, sin embargo, el juzgador federal erró al establecer como tiempo probable de duración del juicio constitucional el de seis meses.

En efecto, atendiendo al contenido de la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 46/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN.", debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio.

Así, para consultar los indicadores, debe ingresarse a la página web *http://www.dgepj.cjf.gob.mx*, posteriormente seleccionar la opción "Estadística judicial" y elegir la opción "Indicadores"; en donde se introducen los rubros: año estadístico (2013, por ser el último disponible); tipo de órgano (Juzgados de Distrito), nivel de indicadores (seleccionar productividad) e indicadores "Todos". Enseguida, aparece un resultado por circuitos, se selecciona el rubro "Primer Circuito" y se muestra el número de días por cada uno de los órganos del Primer Circuito (Juzgados de Distrito por así haberse condicionado la búsqueda desde el criterio a consultar y por el tiempo que reporte este tribunal federal). Lo mismo tendrá que hacerse para obtener los datos estadísticos de los Tribunales Colegiados de Circuito en relación con los recursos de revisión de los que conocen.

En el caso, en primer término debió atenderse a los datos estadísticos de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal para determinar el número de días mínimo y máximo que tardan en la solución de los juicios de amparo indirecto.

Así se obtiene que el promedio de días para resolverse un juicio de amparo indirecto, según la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, es de ciento ochenta días (180).

Por lo que hace a los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito se tiene que el mínimo de días para resolver los recursos de revisión es treinta y uno punto cero cinco días (31.05) y el máximo es de sesenta y tres punto ochenta y cuatro días (63.84), que sumados y divididos entre dos da un promedio de cuarenta y siete punto cuarenta y cuatro días (47.44).

Ahora bien, sumando ambos resultados (180) y (47.44) da la cantidad de doscientos diecisiete punto cuarenta y cuatro días (217.44) que debe dividirse entre treinta, según la jurisprudencia que se ha citado, dando un total de siete punto dos meses (7.2) que es el tiempo probable para la resolución del asunto contemplando dos instancias.

Luego, si el juzgador estimó que el tiempo probable de duración del juicio de amparo sería de ciento ochenta días (seis meses), su decisión fue incorrecta, toda vez que el cálculo de la garantía debe establecerse de la siguiente manera.

Para obtener el monto de la garantía, debe atenderse al valor de la condena decretada en el juicio de donde emane el acto reclamado; en la especie, puede advertirse que el quejoso fue condenado a pagar la cantidad de $ ********** (**********).

A esa condena debe aplicarse la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días, publicada por el Banco de México que a la fecha de la interposición de la demanda de amparo acorde con la jurisprudencia ya citada, y en este caso fue de 3.2928 (tres punto veintinueve).

Dicha tasa anualizada, esto es, dividida entre doce, da un total de 0.2744 (cero punto veintisiete).

Ahora bien, multiplicando el 0.2744 por 7.2 (siete punto dos meses) da un total de 1.97 (uno punto noventa y siete) que multiplicado por la condena de $ ********** (**********) y dividida entre cien, arroja un total de $ ********** (**********) que es el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados.

En el segundo agravio y tercer agravios de revisión el recurrente aduce que el Juez Federal recurrido violó en su perjuicio el artículo 132 de la Ley de Amparo, porque el monto de la garantía que debió obtener es la cantidad de ********** de acuerdo al siguiente razonamiento:

"… Bajo ese entendido, el monto de la garantía que debió obtener el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, era el resultado de dividir la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil catorce, en razón de que el día doce de diciembre no hubo publicación, que es de 3.2928%, la cual dividida entre cien que es la tasa de interés anualizada se obtiene 0.032928, dividida entre el año fiscal es decir, trescientos sesenta días de conformidad con el artículo 39 de la Circular 3/2012 del Banco de México y multiplicada por seis meses (6) que es el tiempo de duración aproximado del juicio que fijó el Juez de Distrito, multiplicándolo por la cantidad líquida de $ **********, da la cantidad de $ ********** que es el monto de la garantía que debió fijar el Juez de Distrito.

"Por lo tanto, la cantidad de $ ********** (**********), es el monto que en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas y la circular emitida por el Banco de México, se debe fijar para garantizar los daños y perjuicios que en su caso pudieran ocasionar al tercero interesado por la suspensión del acto reclamado."

Los argumentos antes sintetizados son infundados.

Como ya se apuntó, el monto de la garantía es de $ ********** (**********) de acuerdo con las operaciones que deben efectuarse para obtenerla tomando como indicador la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días publicada por el Banco de México, por lo que no pueden tomarse como base las operaciones que pretende el recurrente, quien parte de la premisa equivocada de que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio debe multiplicarse por trescientos sesenta y cinco días y dividirse entre seis meses.

Al resolver los asuntos de los que emanó la tesis I.8o.C.8 K (10a.) sustentada por este Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO.", se concluyó que las operaciones que deben efectuarse para obtener el monto de una garantía son las siguientes:

1. Para obtener el monto de la garantía, debe atenderse en su caso, al valor de la condena decretada en el juicio de donde emane el acto reclamado.

2. A dicha condena debe aplicarse la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días, publicada por el Banco de México en la fecha de

interposición de la demanda de amparo acorde con la jurisprudencia respectiva.

3. La tasa que resulte debe anualizarse, esto es, debe ser dividida entre doce.

4. Esa cantidad debe multiplicarse por los meses que se obtengan con base en la estadística publicada por el Consejo de la Judicatura Federal, esto arrojará el factor correspondiente.

5. Se realiza una regla de tres simple que consiste en multiplicar la condena por el factor y se divide entre cien, la cantidad resultante será el monto de la garantía.

En esas condiciones, es procedente modificar la sentencia recurrida y fijar como garantía para que surta efectos la suspensión la cantidad de $ ********** (**********) que podrá exhibir el quejoso dentro del término y en cualquiera de las formas que se indicaron en la sentencia recurrida.

SEXTO.—Debe declararse sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el quejoso **********, tomando en cuenta que el sentido de la sentencia recurrida es favorable a sus intereses y que subsiste por virtud de la presente ejecutoria, la suspensión de los actos reclamados concedida.

Apoya a las anteriores consideraciones la jurisprudencia 2a./J. 166/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 552, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO INDIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI LA REVISIÓN PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA.—El artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito, y en su último párrafo establece que en todos los casos a que se refiere ese precepto, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión principal. Ahora bien, si se toma en cuenta que el recurso de revisión adhesiva carece de autonomía, al señalar el párrafo indicado que la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste, es evidente que si la revisión principal resulta infundada, aquél debe declararse sin materia, por su naturaleza accesoria."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.—Se modifica la resolución recurrida.

SEGUNDO.—Se concede la suspensión definitiva a **********, contra los actos del Juez Cuadragésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y del director del Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social del Gobierno del Distrito Federal, precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria y para los efectos precisados en la resolución recurrida.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los Magistrados, presidente Abraham S. Marcos Valdés, José Juan Bracamontes Cuevas y Ma. del Refugio González Tamayo, siendo ponente la tercera de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes, en lo relativo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011 (9a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2288, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", en relación con la fijación del monto de la garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, concluyó que para determinar el monto de los daños y perjuicios que pudieran originarse al tercero interesado con el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo, debe atenderse a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), al constituir un indicador monetario que, a diferencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor que sólo refleja el menoscabo o depreciación del dinero, lo actualiza a valor real, ya que permite conocer tanto la pérdida promedio que acarrea para un individuo no tener bajo su dominio una deter-

minada cantidad monetaria (daño), como el rendimiento que pudo originar la que se dejó de percibir (perjuicio), según las condiciones reales del mercado. En ese sentido, al fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión, no debe cuantificarse dos veces la indicada tasa, es decir, aplicar su valor al determinar por separado tanto el monto de los daños como el de los perjuicios que pudieran ocasionarse con la medida al tercero perjudicado, pues tal duplicidad sería contraria a los argumentos dados al emitir la citada jurisprudencia, conforme a los cuales en ese indicador monetario ya se encuentran reflejados tanto unos como otros. Ahora bien, para obtener el monto de la garantía, debe atenderse, en su caso, al valor de la condena decretada en el juicio de donde emane el acto reclamado. A dicha condena debe aplicarse la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, acorde con la jurisprudencia citada, por seis meses que es probablemente el periodo en que se resuelve el juicio de amparo indirecto en lo principal. De lo anterior se tiene que una vez determinada la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio mensual a veintiocho días que publica el Banco de México, ésta debe anualizarse, esto es, dicha tasa debe dividirse entre doce meses para obtener cuál es su monto mensual. El porcentaje que se obtenga debe multiplicarse por seis meses y ése será el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.8o.C. J/1 (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 281/2013. Infored, S.A. de C.V. y otras. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: Roberto Sáenz García.

Incidente de suspensión (revisión) 78/2014. Aerohomex, S.A. de C.V. 9 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: Dinnorah Jannett Carbajal Rogel.

Incidente de suspensión (revisión) 116/2014. María Guadalupe Villalpando Saavedra. 21 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: Roberto Sáenz García.

Incidente de suspensión (revisión) 11/2015. 11 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Secretario: Roberto Sáenz García.

Incidente de suspensión (revisión) 20/2015. Manuel Angulo Cárdenas y otra. 11 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretario: César Cárdenas Arroyo.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. EN CASO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTUDIE LA CAUSA ADUCIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES AL SOBRESEER POR UN MOTIVO DISTINTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA ESA DETERMINACIÓN, PUEDE ACOGER AQUÉLLA SIN NECESIDAD DE DAR VISTA PREVIAMENTE AL RECURRENTE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

AMPARO EN REVISIÓN 208/2014. 18 DE DICIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LUIS GARCÍA SEDAS. SECRETARIO: MANUEL CUAUHTÉMOC BARRAGÁN GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Por otra parte, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 93, fracción I, de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben ser examinadas, aun de oficio, en atención a que la procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal de orden público que debe ser estudiado de manera preferente a los motivos de inconformidad, no obstante que el Juez de Distrito hubiese estimado actualizada una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente, por motivos diferentes a los analizados por el inferior. Así, se estima que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia que el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en suplencia del procurador general de la República y éste en representación del presidente de la República, así como el secretario de Gobernación aducen y que, además, como se dijo, por ser una cuestión de orden de público, este Tribunal Colegiado advierte, en el sentido de que, al no reclamarse por vicios propios el refrendo y la publicación de la ley que contiene el precepto impugnado, atribuidos, respectivamente, al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, mismos que, respectivamente, disponen: "El juicio de amparo es improcedente: I … XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." y "La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I … III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley

encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; …"

No pasa inadvertido que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo señala: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.", sin embargo, dicha hipótesis no aplica en el caso justiciable, pues la causa de improcedencia que se estimó actualizada, como antes se evidenció, sí fue alegada por la autoridad responsable durante el trámite del juicio de amparo indirecto de que se trata y notificada a la quejosa, aquí recurrente, el veinticuatro y veinticinco de septiembre y diez de octubre de dos mil trece, según constancias de notificación (fojas 162, 170 vuelta y 215), razón por la cual resulta innecesario darle vista con ella en esta segunda instancia para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis VII.1o.A.1 K (10a.), con registro digital: 2005494, de este Tribunal Colegiado, consultable en la página 2419, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, Décima Época de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, de título, subtítulo y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. EN CASO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTUDIE LA CAUSA ADUCIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES AL SOBRESEER POR UN MOTIVO DISTINTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA ESA DETERMINACIÓN, PUEDE ACOGER AQUÉLLA SIN NECESIDAD DE DAR VISTA PREVIAMENTE AL RECURRENTE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).—En caso de que alguna de las partes en el juicio de amparo indirecto aduzca una causa de improcedencia y el Juez de Distrito no la estudie al sobreseer por un motivo distinto, el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto contra esa determinación, puede acoger aquélla, sin necesidad de que previamente le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, ya que al margen de que se inactualiza el requisito legal de que fuera 'no alegada por algunas de las partes', sería ocioso darle vista sobre un aspecto que ya conocía desde la primera instancia y que, desde entonces, estuvo en aptitud de controvertir."

En esas condiciones, con fundamento en los artículos 63, fracción V y 93, fracción III, de la Ley de Amparo debe sobreseerse respecto a los actos atribuidos al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación de los artículos 33, fracciones I, II, III, 34, fracción II, inciso b), 44, fracción V, 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V, 48, 49, 51, 52, 53, 57, primera parte y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 114, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

OCTAVO.—En tales condiciones, procede modificar la sentencia recurrida en la parte que incorrectamente sobreseyó en el juicio, sólo por cuanto hace a los indicados artículos 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V y 57 de la invocada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, en su caso, aplicados en la resolución final con la que concluyó el multicitado procedimiento **********, dictada el diecinueve de junio de dos mil trece por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, sin que, en este momento, dada la subsistencia de la materia de constitucionalidad, deban analizarse los conceptos de violación, los cuales no se transcriben pues, por un lado, no existe disposición legal que obligue a ello y, por otro, se entregaron copias certificadas de la demanda relativa que los contiene a los Magistrados integrantes de este Tribunal Colegiado, adjuntas al proyecto de sentencia.

NOVENO.—Al no existir diversas causas de improcedencia pendientes de estudio o que se adviertan de oficio, lo que procedería es examinar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, aquí recurrente; sin embargo, toda vez que combatió la constitucionalidad de los artículos 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que se estiman aplicados en la resolución final dictada el diecinueve de junio de dos mil trece que decretó la separación del cargo de la quejosa respecto de los cuales subsiste la materia de constitucionalidad, este Tribunal Colegiado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, por las razones que a continuación se exponen:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, su análisis es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien conforme a la esfera de competencias que establece el punto cuarto, fracción I, inciso A), del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su

competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se delegaron facultades a estos últimos para que conocieran de asuntos de constitucionalidad de leyes, resulta que este Tribunal Colegiado se encuentra impedido para resolver el problema de fondo que subsiste en cuanto a la constitucionalidad de las normas reclamadas, porque el tema del asunto no se encuentra comprendido en las hipótesis que dicho acuerdo prevé en el punto cuarto, fracción I, incisos B), C) y D), según se expone a continuación:

a) La norma combatida no corresponde a un ordenamiento local o a un reglamento;

b) Tampoco existe jurisprudencia sobre el tema debatido, inclusive, pendiente de publicación; y,

c) Sobre el tema controvertido no existen tres precedentes del Pleno o de las Salas, indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para integrar jurisprudencia.

Por último, el aspecto relativo a si el asunto en sí mismo considerado o por el estudio que deba realizarse reviste interés excepcional o sea inédito, y se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una cuestión que sólo el Pleno de ese Alto Tribunal puede decidir.

En ese orden de ideas, si como se vio, en el caso se impugna la constitucionalidad de los repetidos numerales 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque se sostiene, en esencia, que transgreden los principios de libertad de trabajo, irretroactividad, legalidad y audiencia, entre otros, así como las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los artículos 1o., 5o., 14, 16, 113 y 123, apartado B, constitucionales, tema que es de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que sobre ellos exista, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas del Máximo Tribunal del País, o bien, tres precedentes emitidos en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación necesaria para constituirla, para que este órgano estuviera en condiciones de resolverlo, en términos de lo dispuesto en el punto cuarto, fracción I, incisos B), C) y D) del aludido Acuerdo General Número 5/2013, de lo que se colige que lo procedente es remitir esta revisión principal y los autos originales del juicio constitucional número 759/2013, al Pleno del Más Alto

Tribunal del País para su conocimiento y resolución, toda vez que es necesario el establecimiento de un criterio definitivo y firme en relación con ese tema.

Por las razones expuestas y con fundamento en los artículos 83 de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto noveno, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013 del trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, procede remitir los autos de este toca, junto con los del señalado juicio de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales procedentes, con testimonio de esta ejecutoria y disquete de la misma, así como copia certificada de ella al Juez de Distrito para los efectos legales a que haya lugar y, además, formar, con copias certificadas de los respectivos escritos de expresión de agravios y de esta ejecutoria, el cuaderno de antecedentes que corresponda.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 92 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—Se modifica la sentencia recurrida para quedar como sigue:

SEGUNDO.—Se sobresee en relación a los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto número 759/2013, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, promovido por **********, atribuidos a las autoridades titular del Centro de Control de Evaluación y Control de Confianza, encargado de la delegación estatal y secretario general instructor del Órgano Auxiliar del Consejo de Profesionalización, todas de la Procuraduría General de la República, consistentes, respectivamente, en la aplicación de evaluaciones de control de confianza (poligráfico, toxicológico y médico), queja promovida mediante oficio **********, de primero de octubre de dos mil doce, y el oficio **********, de veinticuatro de enero de dos mil catorce, por el que se notificó el inicio del procedimiento de separación y se cita a la audiencia de ley a la citada **********, puntualizados en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.—Se sobresee respecto de los actos atribuidos al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el refrendo y publicación de los artículos 33, fracciones I, II, III, 34, fracción II, inciso b), 44, fracción V, 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V, 48, 49, 51, 52, 53, 57, primera parte y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 114, fracción IV, de su reglamento, en términos de la última parte del considerando séptimo de esta ejecutoria.

CUARTO.—Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, por subsistir el problema de constitucionalidad de los artículos 46, fracción II, inciso a), 47, fracciones IV y V y 57 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, respecto de las autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en México, Distrito Federal, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente revisión principal número 208/2014, interpuesta por **********, en contra de la sentencia emitida en el citado juicio de garantías.

QUINTO.—Con testimonio de esta ejecutoria y disco compacto de la misma, remítanse al Pleno del Máximo Tribunal del País tanto los autos del toca 208/2014, como los del repetido juicio de amparo 759/2013, para lo que tenga a bien decidir.

Notifíquese personalmente a la recurrente y como corresponda a las demás partes; agréguese previamente al engrose copia certificada de la sentencia recurrida, así como de la demanda de garantías relativa al juicio de amparo indirecto número 759/2013; envíese copia certificada de esta ejecutoria al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para este tribunal, el cual tiene relevancia documental, y es conservable conforme a la respuesta dada a la consulta formulada por este tribunal, en relación al Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Graciela Guadalupe Alejo Luna, Luis García Sedas y Eliel Enedino Fitta García, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. Fue ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. EN CASO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTUDIE LA CAUSA ADUCIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES AL SOBRESEER POR UN MOTIVO DISTINTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA ESA DETERMINACIÓN, PUEDE ACOGER AQUÉLLA SIN NECESIDAD DE DAR VISTA PREVIAMENTE AL RECURRENTE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

En caso de que alguna de las partes en el juicio de amparo indirecto aduzca una causa de improcedencia y el Juez de Distrito no la estudie al sobreseer por un motivo distinto, el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto contra esa determinación, puede acoger aquélla, sin necesidad de que previamente le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga en términos del artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, ya que al margen de que se inactualiza el requisito legal de que fuera "no alegada por algunas de las partes", sería ocioso darle vista sobre un aspecto que ya conocía desde la primera instancia y que, desde entonces, estuvo en aptitud de controvertir.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.1o.A. J/1 (10a.)

Amparo en revisión 148/2013. Artemio Acacio Luna Marín. 13 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretario: César Ponce Hernández.

Amparo en revisión 197/2013. Margarita Villalvazo Aparicio. 28 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretario: Manuel Cuauhtémoc Barragán González.

Amparo en revisión 108/2014. Mario E. Licona Aguirre. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretario: Manuel Cuauhtémoc Barragán González.

Amparo en revisión 169/2014. Mario Alberto Castillo Castro y coags. 19 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.

Amparo en revisión 208/2014. 18 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretario: Manuel Cuauhtémoc Barragán González.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).

AMPARO DIRECTO 202/2014. 16 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARTA OLIVIA TELLO ACUÑA. SECRETARIA: CLAUDIA CAROLINA MONSIVÁIS DE LEÓN.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación, de suyo suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, aun suplidos en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

Previo a formular los conceptos de violación, el defensor particular del quejoso señala que, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Que los artículos 14, 16 y 20 constitucionales consagran los derechos de exacta aplicación de la ley, de legalidad, de seguridad jurídica y del debido proceso legal.

Como primer concepto de violación, refiere que causa agravio la sentencia combatida, ya que se violentó el derecho humano del debido proceso, primeramente por el Juez de primera instancia y después por la autoridad responsable al confirmar la sentencia bajo diversa argumentación, incurriendo ambas autoridades en inobservancia de las garantías de formalidades esenciales del procedimiento, debida fundamentación y motivación, así como los principios y reglas que rigen el procedimiento penal acusatorio oral y la garantía de defensa consignadas en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Manifiesta que en la acusación formulada por el Ministerio Público no se le atribuyó participación alguna, ya que se refirió en específico a **********,

********** y otro individuo diverso al ahora quejoso y que durante la celebración de la audiencia del procedimiento abreviado, el agente del Ministerio Público reconoció expresamente que la participación de su representado era la culminación del agotamiento del tipo penal, es decir, la obtención del lucro, por lo que estima que la Magistrada responsable supera los hechos materia de la acusación al considerar que tal como lo había determinado el Juez de primer grado, su defendido acompañaba a los coimputados cuando realizaron los actos intimidatorios y que contribuyó en el atemorizamiento o zozobra de la víctima; por lo que, al sentenciar al ahora quejoso por una conducta que no le fue atribuida en la acusación se violentan las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente la contenida en el artículo 379 del Código de Procedimientos Penales, ya que, el ahora quejoso, aceptó los hechos materia de la acusación consistente en la participación que se le atribuyó el día nueve de noviembre de dos mil dos en el estacionamiento de Walmart Fuentes Mares y se dictó una sentencia condenatoria que excede los hechos materia de la acusación, por lo que se colocó en un plano de desigualdad procesal.

En el segundo motivo de disenso, señala que le causa agravio personal y directo la sentencia condenatoria, específicamente el considerando IV, inciso B), en lo tocante a su plena responsabilidad.

Señala que existe violación a las formalidades esenciales del procedimiento consignadas en los artículos 109, 154, 389, fracción II, en relación con los diversos 20, 330, 331 y 333, todos del Código de Procedimientos Penales, los cuales regulan el principio de lealtad y objetividad con base en los antecedentes recabados en la carpeta de investigación y la valoración de la prueba.

Que se sostiene la responsabilidad del quejoso en:

1. En la aceptación de los hechos como requisito para la procedencia del procedimiento abreviado.

2. Que se encontraba con los coimputados en el lugar donde iba a ocurrir el desapoderamiento y que sí se demostró que existía un acuerdo previo.

3. En la verificación de la comunicación vía mensajes por celular.

Considera que con la aceptación en el procedimiento abreviado únicamente reconoce los hechos materia de la acusación cuya acción se le atribuye y ello no constituye propiamente un indicio, ya que la aceptación no excluye al agente del Ministerio Público de la carga probatoria que constitucionalmente tiene como obligación de acreditar con base en los antecedentes de la carpeta

de investigación los elementos del tipo penal y la plena responsabilidad del quejoso.

Refiere que el supuesto fáctico establecido por la autoridad responsable en el que sostiene que tuvo intervención en los actos intimidatorios, partiendo de que acompañaba a los coimputados al momento de ser detenidos, resulta equívoco, ya que debe basarse únicamente en los antecedentes de la carpeta de investigación, por ser con los que aceptó ser juzgado.

Como se anunció los motivos de disenso son fundados, habida cuenta que, en efecto, la responsable se apartó de la acusación al dictar la sentencia reclamada.

Antes de particularizar la afirmación que antecede, se estima oportuno señalar que de lo dispuesto en los artículos 14, 20, fracciones II, VII, VIII y 21 de la Carta Magna, emana que el Constituyente ha elevado a un rango constitucional el ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal.

Así, se tutela como garantía del imputado la exacta aplicación de la ley en materia penal, por virtud de la cual en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

También se establece como principio que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; además, el desahogo de las audiencias y valoración de las pruebas es una facultad propia del Juez, quien ejerce función de manera libre y lógica.

Aunado a lo anterior y con el objeto de no colapsar el proceso penal, se instituyó que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. Se refiere, además, que la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.

El título séptimo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua establece los modos alternativos de terminación del proceso, contemplando en el capítulo I Los acuerdos reparatorios y la suspensión del

proceso a prueba, regulados en los artículos 196 al 209 del citado ordenamiento legal.

A diferencia de éstos, en el título noveno, denominado Procedimientos especiales, capítulo II, el legislador reguló el procedimiento abreviado, resultando oportuna la distinción anterior, en la medida que la voluntad de las partes para solucionar el conflicto tiene un alcance distinto para cada una de estas formas de concluir el procedimiento, como a continuación se verá.

Acorde con las disposiciones adjetivas reproducidas líneas precedentes, el proceso penal se sustenta en el principio de objetividad y deber de decidir. Esto es, los Jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento, y no podrán abstenerse de definir, bajo cualquier pretexto, aun cuando sea el de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna determinación. Asimismo, desde el inicio del proceso y a lo largo de su desarrollo, las autoridades administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y valorar en sus decisiones no sólo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las favorables a él.

Otro principio fundamental que debe observar la autoridad jurisdiccional, atiende a la fundamentación y motivación de las decisiones, es decir, se encuentran obligados a fundar y motivar sus resoluciones. La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales, no reemplaza en caso alguno a la fundamentación ni a la motivación. En esta medida, se estima que no existe motivación cuando se hayan inobservado las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo.

Aunado a lo anterior, tratándose de las pruebas, sólo tendrán valor si han sido obtenidas y producidas por medios lícitos e incorporados al proceso del modo que autoriza el Código de Procedimientos Penales; careciendo de valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas, o violación de los derechos fundamentales de las personas. Los medios de convicción serán valorados por los Jueces según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.

El procedimiento abreviado antes señalado, se tramitará únicamente a solicitud del Ministerio Público en los casos en que el imputado admita el hecho y sus modalidades, que le atribuyera aquél en su escrito de acusación, consienta en la aplicación de este procedimiento y el acusador coadyuvante, en

su caso, no presente oposición fundada; asimismo, la existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Se escuchará a la víctima u ofendido, a pesar de que no se haya constituido como acusador coadyuvante, pero su criterio no será vinculante.

El Ministerio Público podrá presentar la acusación y solicitar la apertura del procedimiento abreviado desde la audiencia en la que se resuelva la vinculación del imputado a proceso, hasta antes del pronunciamiento del auto de apertura de juicio oral. En caso de que el Juez de garantía rechace la apertura del procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá retirar su acusación y solicitar al Juez que fije un plazo para el cierre de la investigación.

La autoridad ministerial manifestará su deseo de aplicar el procedimiento abreviado al formular su acusación por escrito, o verbalmente, en la misma audiencia intermedia. En este último caso, el Ministerio Público podrá modificar su acusación, así como la pena requerida.

También podrá solicitar la aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada para el delito por el cual acusa.

El Juez de garantía, antes de resolver sobre la solicitud del Ministerio Público, verificará que el imputado ha prestado su conformidad con el procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada y con la asistencia de su defensor; que conoce su derecho a exigir un juicio oral, que renunció voluntariamente a ese derecho y aceptó ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación; entendió los términos del acuerdo y las consecuencias que pudiera implicarle y que aceptó los hechos materia de la acusación y sus modalidades en forma inequívoca y de manera libre y espontánea.

Respecto a la solicitud de procedimiento abreviado, el Juez aceptará la del Ministerio Público cuando considere actualizados los requisitos correspondientes. En el supuesto de que no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición de la víctima u ofendido, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura de juicio oral. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio, se tendrán por no formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado, así como las modificaciones de la acusación efectuadas para posibilitar la tramitación abreviada del procedimiento. Asimismo, el Juez dispondrá que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceder de conformidad al procedimiento abreviado, sean eliminados del registro.

Acordado el procedimiento abreviado, el Juez abrirá el debate y otorgará la palabra al Ministerio Público, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.

Terminado el debate, el Juez emitirá su fallo sobre condena o absolución en la misma audiencia, y deberá dar lectura pública a la sentencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. En el supuesto de ser condenatoria, no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público.

En ningún caso el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas en la ley, cuando correspondiere.

Asimismo, en el procedimiento abreviado, con la admisión de los hechos que el fiscal atribuye al imputado en su acusación, con base en los antecedentes recabados en la investigación, queda fijada la litis y se toma la decisión de renunciar al derecho de exigir un juicio oral.

Entonces, la garantía del imputado relativa a que la autoridad penal lo juzgue con base en los hechos que se le atribuyen queda resguardada, pues sólo en este sentido puede imponerse límite a su actividad, ya que las cuestiones de derecho relacionadas con la valoración de la prueba, como se desprende del contenido del artículo 20, fracción II, constitucional, no pueden delegarse, actualizándose la libertad y empleo del razonamiento lógico para emitir el juicio.

Por tanto, este procedimiento especial no despoja al Juez de la facultad que constitucionalmente le ha sido dada para valorar las pruebas de manera libre, conforme a la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, tampoco lo excluye de la obligación de motivar el acto, lo cual implica expresar las razones por las que concede o niega eficacia probatoria al acervo probatorio, apegado a las reglas de la sana crítica.

Entonces, aun cuando el imputado acepte o bien no se oponga a la acusación formulada por el Ministerio Público, corresponde al Juez de garantía determinar si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación en todos sus aspectos.

Ahora bien, de lo anterior se obtiene que el Juez, con base en la acusación presentada por el Ministerio Público y con las pruebas que obren en la

carpeta de investigación, las que deberá valorar en su totalidad, emitirá el fallo en el procedimiento abreviado.

En la especie, del análisis de la sentencia combatida se advierte que la Magistrada responsable violó el principio de congruencia que toda sentencia debe contener, pues determinó que quedó probado el hecho por el que la representación social formuló acusación y las consideraciones que externó en torno al de extorsión por el que emitió la sentencia reclamada, se circunscribieron a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los actos de intimidación de que fue objeto el pasivo para obligarlo a darle información a los activos para lograr apoderarse del numerario que trasladaba en el vehículo de transporte de valores, y concluyó diciendo que el ilícito en cita se consumó cuando la víctima fue intimidada para obligarla a que proporcionara información.

Y, en el tema relativo a la responsabilidad del ahora solicitante del amparo, mantuvo la misma línea argumentativa, partió del hecho relatado por el denunciante en el sentido de que los actos intimidatorios se prolongaron en el tiempo, porque refirió que los activos acudieron a su domicilio en varias ocasiones; que identificó a dos y como indicó que cuando éstos fueron a su vivienda los acompañaban más personas a las que no logró verles la cara, la responsable concluyó que entre ellos estaba ********** aquí quejoso, lo que derivó de los que dijo indicios, entre ellos, la aceptación que efectuó de los hechos que se le atribuyen.

Tal forma de proceder deviene ilegal, porque la responsable pasó por alto lo que manifestó el agente del Ministerio Público en la audiencia intermedia, en el sentido de que la participación que iba a desempeñar el acusado, ahora quejoso, era en la culminación del agotamiento del tipo penal, es decir, la obtención del lucro, porque la consumación del delito (mediante amenazas) se dio desde el primer momento y que estuvieron acudiendo e interviniendo diversas personas, limitándose a declarar infundado el planteamiento del aquí quejoso consistente en que el único indicio que se le puede atribuir es que fue detenido acompañando a los coimputados.

Para luego establecer: "… Tales argumentos, se consideran incorrectos, debido a que analizados los antecedentes de investigación individualmente, es decir, fuera del contexto de las declaraciones del denunciante, esto es, sin relacionarlo con su dicho, implican una impresión errónea sobre su valor y las conclusiones a las que conllevan. Y por ello, este tribunal, estima que el Juez de garantía estuvo en lo correcto al decidir, en primer término, el valor que

merecía el dicho del pasivo. Y la Sala estima acertado que lo considerara sincero, por lo siguiente: No es posible que el pasivo falseara los hechos denunciados, debido no sólo a que ello implicaría acudir varias veces a las oficinas del órgano investigador y del jurisdiccional, lo que pudiera generarle interferencia con sus labores, sino también, porque no se deduce de los antecedentes, que falseándolos evadiría algún tipo de responsabilidad, o bien, obtendría algo que le beneficiaría. Ni se advierte tampoco que tuviera algún motivo malicioso que lo llevara a inventarlos. Y tampoco se desprende de ellos, que tuviera algún motivo de animadversión contra las personas que le imputan los hechos, sino que por lo contrario, aparece que ni siquiera los conocía, ya que no son persuasivos los dichos de las testigos, ********** y **********, en el sentido de que la víctima y el coimputado, **********, se conocían, ya que como acertadamente lo concluyó el a quo, el dicho de **********, puso de manifiesto que había interés de que se declarara falsamente que el denunciante, junto con los detenidos, había planeado el robo de los valores que trasladaba, porque refirió en una posterior declaración, que así se lo pidieron a él que lo hiciera, dos sujetos que acudieron a su casa. Por lo que entonces, no es creíble la versión de las citadas testigos, de que el pasivo conociera a uno de los coimputados. b) Además, el dicho de la esposa del pasivo, a la que se denomina testigo 1, abona en las aseveraciones de aquél, porque fue ella quien atendió a los dos sujetos que acudieron en una primera ocasión a buscar a su cónyuge y a quien no encontraron y de nuevo los atendió en una segunda ocasión que regresaron. Y también se percató de una tercera ocasión que regresaron esos mismos sujetos a bordo de una troca blanca, según dijo, y observó que su marido, es decir, el denunciante, los atendió. Asimismo, refirió que su esposo le comunicó el motivo de la visita de tales sujetos, que a saber fue el mismo que señaló en su denuncia, así como también, testificó sobre el cambio de celular que le hicieron al denunciante y puso de manifiesto que fueron varias las veces que acudieron a su domicilio tales personas. Este dicho de la testigo denominada uno, es relevante, porque corrobora la veracidad de la información del pasivo, en lo que respecta a que fueron varias las veces que acudieron a su casa, los sujetos que sí logró identificar y otro u otros que no logró reconocer; así como también, demuestra que se trasladaba en una pick up de color blanca y que le cambiaron el celular que tenía, por otro. De ahí que entonces, la Sala estima que si tales aseveraciones del pasivo se encuentran apoyadas, debe creérsele también cuando asegura que en tales visitas ocurrieron ciertas cosas que nada más él presenció y que a saber fue, que tales sujetos le colocaron una granada en su mano y le señalaron que conocían sobre su familia y sus movimientos, así como que reiteradamente le llamaban al celular. Ello, porque el dicho de su esposa armoniza con el de él, ya que aquélla sí se percató de las varias ocasiones en que los

individuos acudieron a su domicilio a buscar al denunciante. En la inteligencia de que las aseveraciones de tal testigo, nombrado como 1, no se advierten increíbles o maliciosas, ya que no hay dato que así lo demuestre. Y no es factible que falseara su testimonio para apoyar el del pasivo, de quien como ya se dijo, no existen motivos que hagan dudar de su versión. c) Por otra parte, como bien lo expresó el a quo, el testigo denominado P.A., también aportó información que puede considerarse eficaz, para creer que el pasivo sí vivió la situación que denunció. Ya que aunque, como lo alega el apelante, sea un testigo de oídas, no pasa desapercibido para la Sala que dicho testigo expresó ser el padre del denunciante y, por ende, se considera que en efecto, dado tal parentesco, el pasivo, por la gravedad de lo que pedían que hiciera, lo natural fuera que lo comentara con las personas más cercanas a él, como lo son, su esposa, quien por su parte dijo que también a ella se lo comunicó y a su padre. Y tal circunstancia cuando menos, sugiere que aun cuando tales testigos no les conste, por no presenciar lo que a la víctima le pidieron los citados sujetos que hiciera, de cualquier manera puede creerse que así fue, ya que si no hubiese ocurrido, entonces no tendría el pasivo porqué habérselo comentado a su esposa y a su progenitor. d) De igual modo, como lo advirtió el a quo, los otros indicios, como lo fueron el que se detuviera a dos de los sujetos que identificó la víctima como aquellos que, junto con otro a veces y otros, en diversas ocasiones, acudieron a su casa para imponerle u ordenarle, mediante una serie de actos que realizaron, que les informara sobre el vehículo de valores que conducía, así como sobre su ruta el día de los hechos. Detención que ocurrió en el sitio en el que, precisamente, dijo el pasivo que se pretendería llevar a cabo el desapoderamiento de los valores que trasladaba, e incluso, el hecho de que se les aseguraran ciertos objetos, que ya la víctima dijo que le habían mostrado un día antes para poder abrir el camión y que la Sala considera idóneos para tal efecto, como lo son, una sierra eléctrica, una barra de metal y dos chupones; éstos son indicios que también abonan en la veracidad de la totalidad de las afirmaciones del denunciante. En razón de que tal detención y el aseguramiento de los objetos, confirmaron las aseveraciones del denunciante. Ahora bien, como se acaba de referir que la identificación que realizó la víctima, de dos de varios de los sujetos que acudieron a su casa a amedrentarlo, es un indicio que válidamente puede considerarse que apoya su dicho, entonces, es menester dar respuesta al diverso agravio del apelante que versa sobre tal tema. Porque alega que la forma como reconoció el pasivo a esos dos sujetos, no fue lícita, esto es, a través de fotografías; ya que a su juicio, tal identificación debió hacerse conforme lo exige la legislación procesal, que la Sala entiende que alude al artículo 262 del Código de Procedimientos Penales; pero tal agravio es infundado, a juicio de la Sala, porque con la lectura interpretativa restrictiva que propone el apelante respecto del artículo 264 del citado código, relativo al

reconocimiento por fotografía, y que traduce dicho recurrente, en que este tipo de reconocimiento sólo procederá cuando no esté presente o no pueda ser presentada la persona a la que ha de reconocerse, implicaría vulnerar el principio de libertad probatoria que consigna el artículo 330 del mismo código. Por lo que, la Sala opta por una interpretación extensiva de ese precepto (artículo 264) y con ella, concluye que el reconocimiento por fotografía puede realizarse esté presente o no, pueda ser presentada o no la persona que va a identificarse; ya que tal dispositivo legal utiliza la palabra podrá exhibirse y no dice deberá exhibirse sólo en tales casos. De ahí que bajo tal perspectiva de interpretación, la Sala considera ajustada a derecho la identificación realizada por el pasivo, sobre todo, si la hizo en presencia de un defensor público. Y por ende, no se vulnera, contra lo que entiende el apelante, sus derechos fundamentales, máxime si incluso, la identificación que realizó el denunciante, se advirtió sincera, ya que de entre las fotografías que se le pusieron a la vista, sólo reconoció a los coimputados ********** y **********, pero no al sentenciado. Por lo anterior, es que entonces este tribunal considera innecesario dar respuesta a los agravios que sobre el tema plantea el recurrente, relativos a que con tal modo de identificación, se confrontaron derechos humanos de la víctima y del sentenciado; ya que en realidad no medió tal conflicto, puesto que por las razones ya expresadas, el artículo 264 no prohíbe expresamente la identificación mediante fotografías cuando las personas a identificar sí puedan ser presentadas o estén presentes, y la Sala no advierte que con ello se vulnere algún derecho fundamental del sentenciado, máxime si incluso no fue reconocido entre ellas. Y contra lo que alega, del relato que hizo el agente de la fiscalía en la audiencia, aparece que en el reconocimiento por fotografías, sí hubo un defensor público. Y en consecuencia, también es innecesario dar respuesta al otro agravio que versa sobre que el reconocimiento a través de la cámara de Gesell, hubiera podido proteger la identidad del pasivo durante el reconocimiento que hiciera. Ello, porque se insiste, el reconocimiento por fotografías no está prohibido para cuando se encuentre presente el que va ser identificado. Y entonces, no es aplicable al particular la tesis consultable con el número de registro electrónico 160246 del IUS de la Red Jurídica Nacional, que cita el apelante y cuyo rubro dice: 'COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. LIBERTAD DE TRABAJO Y LIBRE CIRCULACIÓN. SE VIOLAN DICHAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES SI LA AUTORIDAD COMPETENTE EN LA MATERIA DE MANERA OMISIVA TOLERA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES POR UN TERCERO (PARTICULAR) QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY LE SON EXCLUSIVAS DE ELLA.' Por otra parte, y contra lo que alega el apelante, la información extraída del aparato telefónico del pasivo, sí es válido tenerlo como dato incriminatorio, en razón de que, contra lo que alega, en el caso no era necesario que hubiera manifestación expresa de la víctima para que se

extrajera la información. Ya que la Sala estima que fue acertado lo que concluyó el a quo, relativo a que tratándose del denunciante, puede deducirse que medió su consentimiento, cuando menos tácito, porque es natural que al plantear los hechos al órgano investigador, tenía interés de su esclarecimiento, al ser él, el directamente afectado. De ahí que entonces puedan tenerse como válidos todos los mensajes que aparece que envió el día en que se detuvo a los coimputados y al sentenciado y que dicen: me cambiaron de ruta, voy al sur, 8 kg vamos a cargar gas, Soriana Fuentes Mares, Smart más seguro ahí, … Smart Fuentes Mares 450 mil pesos, es esta rápido. … En cambio, por lo que respecta a la información de los celulares asegurados a los coimputados y el sentenciado, la misma no debe considerarse, debido a que efectivamente, existe criterio de la Suprema Corte de Justicia y que citó el recurrente, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero 2013, página 431, que dice: 'DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.' De ahí que la información recabada de los teléfonos celulares de aquéllos no puede ser considerada con valor, dado que no se solicitó la intervención de sus teléfonos a la autoridad judicial. Sin embargo, sí puede considerarse, por las razones ya señaladas, la información extraída del celular del pasivo. Y la misma abona en la veracidad de la totalidad de su dicho, porque aparece que envía mensajes sobre su ubicación e incluso proporciona datos del numerario el día en que se iba a perpetrar el desapoderamiento, pero fueron detenidos el sentenciado y sus coimputados. Por todo lo antes expuesto, puede entonces considerarse acertada la conclusión del a quo, de tener como cierto que durante varios días, como lo aseveró el pasivo, el mismo fue objeto de intimidaciones. Ya que la Sala advierte que se le amedrentó, no sólo cuando se le colocó una granada en la mano para que participara en el desapoderamiento de los valores que trasladaba en un camión, mediante la información de su ruta y la descripción del automotor; sino también con las continuas visitas que se le hacían a su casa y que como además fueron varios los sujetos que acudían a su domicilio, así como con las manifestaciones que le hicieron sobre que lo habían estado siguiendo y le enumeraron las actividades que él realizaba; y con las constantes llamadas que le realizaban, primero, a su teléfono celular y luego, al que los sujetos que lo intimidaban le proporcionaron. E, incluso, con las llamadas o mensajes que se intercambiaron entre activos y pasivo el día que se detuvo a los primeros. Es decir, fueron todas esas circunstancias las que intimidaban, amedrentaban o infundían zozobra al pasivo y no pueden desvincularse una de la otra como si fueran actos aislados. En la inteligencia de que al atemorizar o intimidar al

denunciante para obligarlo a que proporcionara la información antes citada, era con el afán, por parte de los sujetos activos, de apoderarse del numerario que el mismo trasladaba, lo que no pudo llegar a realizarse, debido a que fueron detenidos en el lugar que el pasivo les indicó que arribaría con el vehículo de valores. Y si tal hecho quedó probado con el dicho del denunciante, que se corroboró en su totalidad con los antecedentes de investigación antes citados; entonces fue correcto, contra lo que alegó la defensa en el contradictorio que se llevó a cabo en la audiencia que se abrió para tal efecto en este recurso en días pasados, que el a quo subsumiera tal hecho en el delito de extorsión, previsto en el primer párrafo del artículo 231 del Código Penal y que lo comete a quien por cualquier conducto, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o de algún tercero, se le impondrán de cuatro a quince años de prisión y de cien a ochocientos días multa. En efecto, se concluye de la anterior manera, porque esta Sala es del criterio que dicho tipo penal no es un delito de resultado, sino de peligro, ya que el núcleo rector del tipo es obligar, por lo que no es necesario que el obligado llegue a realizar, omitir o tolerar el acto que se le está imponiendo, exigiendo o apremiando mediante la violencia o intimidación y con ánimo de lucro para que se consuma el delito. En el caso entonces, bastó para que se consumara el delito, con la circunstancia de que se obligara al pasivo, mediante diversos actos que lo intimidaron y que ya se describieron, como fueron, colocarle una granada en la mano, visitarlo en su domicilio y por varias ocasiones, mencionándole además que lo vigilaban, y las llamadas y mensajes continuos que le hacían a su celular, para que la víctima realizara una serie de actos; independientemente de que los llevara a cabo o no. Actos que consistían en que debía dar a los sujetos activos, información de las características del camión en que conducía los valores, así como la ruta de traslado del día de los hechos y que además colaborara con ellos para extraer el numerario del camión. En el entendido de que al pedirle los activos a la víctima que realizara tales actos, era con un afán de lucro, puesto que querían apoderarse ilícitamente del dinero que la misma transportaba. Debe agregarse, que no cabe duda que la víctima fue intimidada, en razón de que así lo sugiere, no sólo que le hubiere manifestado a su esposa sino también a su padre lo que estaba ocurriendo, sino también que se deduce que es natural que se hubiera logrado la intimidación, después de todos los actos que desplegaron los activos para obligarlo a que realizara lo que le exigieron. Ahora bien, alegó el defensor en esta audiencia, que de considerar consumado el delito de extorsión, es decir, da a entender que de concluir que es un delito de peligro, se confundiría con el delito de amenazas. Sin embargo, la Sala considera que no es acertado tal alegato, ya que en el último de los ilícitos (previsto en el artículo 204); no se exige que la intimidación sea con el afán de que se tolere, realice u omita algún

acto, como exige el tipo penal de extorsión. Consecuentemente, debe confirmarse la decisión del Juez de tener por actualizado el delito de extorsión, previsto en el primer párrafo del artículo 231 del Código Penal. Aunque la Sala difiere del juzgador y de la agente de la fiscalía que intervino en la anterior audiencia, en la que tuvo lugar el contradictorio de este recurso, en lo relativo a que se actualizó el delito de extorsión, porque se consumó cuando el imputado proporcionó la información que le solicitaban los que lo intimidaron. Ya que en realidad ese ilícito, a criterio de la Sala, se consumó cuando la víctima fue intimidada para obligarla a que proporcionara información. Además de que no pasa desapercibido que no fue sólo información la que se ordenó al pasivo que se les diera. Sino que también le exigían que el día del desapoderamiento él levantara la compuerta del camión. Sin embargo, se insiste, como tal delito es de peligro y no de resultado, no era necesario para tenerlo por consumado, el que la víctima hubiere o no proporcionado información o les hubiere ayudado o no, a los que lo intimidaron a tener acceso al camión de valores. B) Ahora bien, en el tema de la responsabilidad del sentenciado, es menester también dar respuesta a los planteamientos de oposición que versan sobre tal tópico, ya que alegó el recurrente, que no hay datos que prueben que él hubiere intervenido. Que no hubo codominio funcional del hecho, porque no se demostró la existencia de un acuerdo expreso o tácito para perpetrar el robo o la extorsión, ya que no se probó que él hubiera aceptado contribuir con una tarea específica. Además de que no fue identificado por la víctima. Y en el teléfono que se le aseguró, no se encontró dato alguno del que se infiera su participación en el ilícito. Y que el hecho de que se le hubiese detenido en compañía de otros coimputados, es sólo un indicio que es insuficiente para emitir sentencia condenatoria y que también es ineficaz, porque no demuestra que él supiera de la extorsión o hubiere realizado alguna tarea en ella. Pero los anteriores agravios son infundados. En razón de lo siguiente: Como ya se dijo, del relato de la víctima se desprende que los actos intimidatorios, no sólo ocurrieron en un solo día, sino que se prolongaron por varios días, pues el pasivo dijo que a su casa acudieron varias veces dos sujetos, de los cuales, si bien identificó únicamente a ********** y a **********, no pasa desapercibido que como lo concluyó el Juez de primer grado, también dijo que cuando aquellos coimputados iban a su vivienda, los acompañaban más personas a las que él no podía verles la cara. Por lo que puede concluirse que entre las mismas se encontraba **********, pues así lo revelan los siguientes indicios: 1. En primer término, la aceptación que hizo éste de los hechos que se le atribuyen, que en el caso fue que se obligó mediante intimidación al pasivo a la realización de ciertos actos y 2. Que se le encontrara acompañando a los coimputados en el lugar donde iba a ocurrir el desapoderamiento. Sin que sea posible lo que alega la defensa, en relación a que no se demostró la exis-

tencia de un acuerdo previo, ni siquiera para cometer el desapoderamiento del numerario que transportaba el pasivo, ni tampoco es correcto lo que alega en sus agravios el imputado, en el sentido de que él sólo acompañaba a los coimputados pero ignoraba lo que éstos pretendían hacer, en razón de que es evidente que el sentenciado lo sabía, ya que cuando se le detuvo junto con los coimputados, se les encontraron herramientas idóneas para vencer materialmente lo que pudiera resguardar el dinero en el camión de valores y sería increíble que el inculpado no las hubiera visto. Pero sobre todo, porque puede deducirse que los coimputados no llevarían consigo a alguien sin que éste supiera lo que iban a realizar, ya que ello generaría que, o bien, no pudieren llevar a cabo la sustracción, o bien, que cuando menos, hubiese un retraso importante en su ejecución; por lo que no era factible que ********** no supiera a qué acompañaba a sus coimputados, porque éstos no arriesgarían así la ejecución de su plan, de ahí que es evidente que sabía desde antes lo que iban a realizar. Y por ello es intrascendente que en el celular que se le aseguró al sentenciado, no viniera ningún dato que lo conectara con el pasivo. Además, también estuvo en posibilidad de enterarse de los mensajes que enviaba la víctima, en los que les señalaba la ruta del camión de valores que conducía, toda vez que los acompañaba. Y si es así, entonces es válido concluir que no sólo conocía a cabalidad sobre el robo que se llevaría a cabo, sino que era natural que interviniera en los actos intimidatorios anteriores al robo, puesto que ello sería lo que aseguraría no sólo la viabilidad, sino el éxito del desapoderamiento, y es evidente que intervino en los actos intimidatorios, ya que el pasivo dijo que fueron varias las personas que acompañaron a ********** y a ********** a su vivienda durante los días que se le estuvo intimidando o atemorizando para que interviniera en la sustracción, y puede deducirse que **********, fue una de tales personas, aunque también debe concluirse que fue de los que se quedó en el interior del automotor, ya que el pasivo no lo reconoció de entre las fotografías que se le pusieron a la vista; sin embargo, puede entenderse que sabía que se estaban llevando a cabo actos de intimidación contra el pasivo, en razón de que era al domicilio del mismo al que acudían y no a otro sitio en donde pudieran hablar libremente sobre el desapoderamiento, y además, fueron varias las veces las que acudieron a la casa del pasivo. Por lo que puede deducirse que no sólo sabía, sino que aceptaba con su presencia que se intimidara al pasivo. Ahora bien, la cuota de participación que se le atribuye, es precisamente que acompañara a los coimputados, reforzando con tal situación, la intimidación de que era objeto el pasivo. Y es evidente que tal aportación fue esencial, pues contribuyó el atemorizamiento o zozobra de la víctima, porque el número de los sujetos que acudían a su casa, también es un factor que contribuyó a ello. Además, la comunicación verificada el día de la detención, vía mensajes por celular, entre el pasivo con los

coimputados y el sentenciado, en específico con **********; constituyó no sólo una reafirmación de la zozobra que se había generado en el pasivo desde la primera ocasión en que fue visitado y se le hizo la propuesta de participar en el robo de los valores que transportaba; reafirmación que estriba en que con tal comunicación de nuevo se le hacía patente al pasivo la firmeza de continuar con el plan de desapoderamiento y, por ende, puede concluirse que ello implicó no sólo la continuación sino el reforzamiento del atemorizamiento de la víctima, debido a que de esa manera se le hacía sabedor de que no se había cejado por los activos en su exigencia de que participara en lo que le habían propuesto. Y si es así, entonces es claramente evidente que también en esta última etapa el sentenciado participó de tal atemorizamiento que se estaba reforzando en la mente del pasivo. Pues puede concluirse que supo el sentenciado de tales mensajes, dado que viajaba con los coimputados y, por ello, no había manera de ignorarlos, puesto que incluso versaban acerca de la dirección o de la ruta del camión que trasladaba la víctima y había que basarse en ellos. Por lo antes expuesto, debe entonces confirmarse la decisión del a quo, relativa a tener demostrada la coautoría material del sentenciado en el delito antes citado, en los términos de la fracción III del artículo 21 del Código Penal."

En este sentido, le asiste la razón al peticionario de garantías cuando aduce que la responsable soslayó lo que relató el agente del Ministerio Público; en torno a los hechos materia del procedimiento abreviado y los que particularmente se atribuyeron al sentenciado quejoso; lo que se robustece si se toma en cuenta que, al responder los agravios esgrimidos en apelación, la responsable destacó como dato relevante lo que señaló la víctima en el sentido de que los actos intimidatorios se prolongaron por varios días y aunque advirtió que sólo reconoció a dos personas, diciendo que intervinieron más a los que no les vio la cara, concluyó que entre éstas se encontraba **********, con lo que pasó por alto que el Ministerio Público nunca le imputó esa participación.

Ello trajo como consecuencia que la responsable dijera que un indicio de responsabilidad lo constituía la aceptación de los hechos que se le atribuyeron, apartándose así del señalamiento del órgano técnico de acusación.

Ahora bien, debe destacarse que el defensor particular del imputado, aquí quejoso, en la audiencia de debate del procedimiento abreviado solicitó la exclusión y anulación de los antecedentes de investigación expuestos por la representación social en la audiencia del procedimiento abreviado, en específico, del oficio número ********** de diez de noviembre de dos mil doce, realizado por el ingeniero **********, en relación con seis teléfonos celulares

asegurados tanto a la víctima como a los imputados, aduciendo que se obtuvo mediante manipulación y sin contar con orden judicial, lo que violó los derechos humanos relativos al debido proceso, intimidad personal e inviolabilidad de las comunicaciones, previsto en el artículo 16 constitucional.

Por su parte, la representación social, en uso de su derecho de réplica, respecto a la información extraída del teléfono de la víctima; señaló que no es prueba ilícita, ya que en colaboración del Ministerio Público al denunciar es el principal interesado en proporcionar los medios de prueba o indicios que tuviere a su alcance.

El Juez de garantía del Distrito Judicial Morelos concluyó que ********** sí tenía conocimiento de la empresa criminal y el motivo por el cual se encontraba en el lugar en donde fue detenido, con base en los mensajes que se le estuvieron mandando y recibiendo por la víctima, aunado a que tenía las herramientas y estaba en el lugar que le había indicado la víctima.

Finalmente, al examinar lo relativo a la información extraída de los teléfonos celulares asegurados por la fiscalía, pertenecientes tanto al quejoso como a sus coimputados, la responsable determinó que no debía considerarse, porque no se solicitó la intervención de esos teléfonos a la autoridad judicial, lo que apoyó en la tesis 1a./J. 115/2012 (10a.), de rubro: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO."

En el anotado orden de ideas, se concluye que la incongruencia entre la sentencia y la acusación es contraria al artículo 379 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua y, por ende, de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales.

Respecto al tema del debido proceso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4491/2013, precisó que:

"… implica que un inculpado debe gozar de su derecho a la libertad, no pudiendo privársele del mismo, sino cuando existan suficientes elementos incriminatorios y se siga un proceso penal en su contra, en el que se respeten

las formalidades esenciales del procedimiento y se le otorgue una defensa adecuada, que culmine con una sentencia definitiva que lo declare penalmente responsable en la comisión de un delito.

"...

"Lo anterior, como ya se dijo, en atención a los principios establecidos en el artículo 20, apartado A, en específico la fracción V, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 21, párrafos primero y segundo y 102, apartado A, segundo parágrafo, de la Norma Fundamental, aun cuando se trate del procedimiento abreviado regulado por los artículos del 388 al 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México,[1] el Ministerio

[1] "Artículo 388. El procedimiento abreviado se tramitará a solicitud del Ministerio Público en los casos en que el imputado admita el hecho que se le atribuya en la acusación y consienta en la aplicación de este procedimiento, y el acusador coadyuvante, en su caso, no presente oposición fundada.
"También, podrá formular la solicitud el imputado siempre y cuando se reúnan los requisitos del párrafo anterior y no exista oposición del Ministerio Público.
"La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Se escuchará a la víctima u ofendido de domicilio conocido, a pesar de que no se haya constituido como acusador coadyuvante, pero su criterio no será vinculante. La incomparecencia de la víctima u ofendido a la audiencia no impedirá que se resuelva sobre la apertura del procedimiento abreviado y, en su caso, se dicte la sentencia respectiva."
"Artículo 389. El Ministerio Público podrá presentar la acusación y solicitar la apertura del procedimiento abreviado desde la audiencia en la que se resuelva la vinculación del imputado a proceso, hasta antes del pronunciamiento del auto de apertura de juicio oral.
"En caso de que el Juez de control rechace la apertura del procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá retirar su acusación y solicitar al Juez que fije un plazo para el cierre de la investigación, que no podrá exceder del originalmente señalado.
"El Ministerio Público manifestará su deseo de aplicar el procedimiento abreviado al formular su acusación por escrito, o verbalmente, en la misma audiencia intermedia.
"En caso de dictarse sentencia de condena, se aplicarán las penas mínimas previstas por la ley para el delito cometido, reducidas en un tercio, sin perjuicio de cualquier otro beneficio que proceda en términos del Código Penal.
"Tratándose de los delitos de extorsión, secuestro, homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven, el homicidio culposo de dos o más personas, violación, robo que ocasione la muerte, robo de vehículo automotor con violencia, robo cometido a interior de casa habitación con violencia, abuso de autoridad contemplado en la fracción II del segundo párrafo del artículo 137 bis, delitos contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad y órganos jurisdiccionales, de la seguridad de los servidores públicos y particulares, y el realizado contra el ambiente, contemplado en el párrafo segundo del artículo 229, solamente se aplicarán las penas mínimas previstas por la ley para el delito cometido, con exclusión de cualquier otro beneficio."
"Artículo 390. Antes de resolver sobre la solicitud del Ministerio Público o del imputado, el Juez verificará que éste último:
"I. Haya otorgado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada y con la asistencia de su defensor;

Público, en cuanto órgano del Estado encargado de la investigación y persecución de los delitos, tiene la obligación de demostrar los hechos en los que se basa su pretensión punitiva; y también tiene el deber de justificar la procedencia de las penas que solicita, atendiendo a que precisamente una de las finalidades del ejercicio de la acción penal y del proceso es la de imponer al gobernado las consecuencias jurídicas del delito que establece la ley. ...."

Por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable:

a) Deje sin efectos la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte una nueva resolución en la que:

b) Resuelva la litis de la apelación, con base en los actos que el Ministerio Público relató como integrantes del procedimiento abreviado y los que en particular le atribuyó al aquí quejoso.

c) Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, a la luz de los antecedentes de investigación que refirió la fiscalía, con exclusión de los que declaró que no debían considerarse.

"II. Conozca su derecho a exigir un juicio oral, que renuncia voluntariamente a ese derecho y acepta ser juzgado con los antecedentes recabados en la investigación;
"III. Entienda los términos de este procedimiento y las consecuencias que el mismo pudiera implicarle; y
"IV. Haya reconocido ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su intervención en el delito."
"Artículo 391. El Juez aprobará la solicitud cuando considere satisfechos los requisitos correspondientes.
"Cuando no lo estimare así, o cuando considere fundada la oposición, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura de juicio oral. En este caso, el requerimiento anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el juicio, se tendrán por no formuladas la aceptación de los hechos por parte del acusado. Los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de proceder de conformidad al procedimiento abreviado, carecerán de eficacia."
"Artículo 392. Acordado el procedimiento abreviado, en su caso, el Juez señalará fecha para una audiencia dentro de los cinco días siguientes, en ella otorgará la palabra al Ministerio Público, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamenten; a continuación, dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado."
"Artículo 393. Terminado el debate, el Juez emitirá su fallo sobre condena o absolución en la misma audiencia, observando las reglas aplicables a la sentencia.
"En ningún caso el procedimiento abreviado impedirá la concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas en el código, cuando correspondiere."

Sirven de apoyo a la anterior determinación las tesis con datos de identificación, rubro y texto siguientes:

"Registro: 164271
"Época: Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de Tesis: Aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXXII, julio de 2010
"Materia: Penal
"Tesis: XVII.1o.P.A.56 P
"Página: 2045

"PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).—El artículo 408 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua establece los extremos en que debe quedar fijada la litis en la alzada, con base en las consideraciones que las partes sometan a la potestad de la Sala penal constituida como Tribunal Unitario, quedando prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas o que estén más allá de los límites solicitados, a menos que se trate de una lesión a los derechos fundamentales. Por su parte, en términos del artículo 414, fracción IV, del citado ordenamiento procesal, es apelable la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, redacción que se aprecia genérica, es decir, no se constriñe al caso de la absolución, pues abarca tanto el fallo condenatorio como el absolutorio; por tanto, los agravios que dicha resolución provoque a las partes abre la oportunidad para que la impugnen a través de la apelación y se fije la litis del mencionado recurso, pues el acuerdo que las partes someten ante el Juez de garantía en el procedimiento abreviado, que se vincula con la aplicación del derecho que lleva a cabo dicho juzgador al dictar sentencia, no fue ponderado por el Constituyente como un caso de exclusión de debate en el recurso de apelación y, por ende, debe estudiarse por la alzada para resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito y la aplicación de las penas, a efecto de cumplir con el objeto del proceso, que se traduce en la restauración de la armonía social entre sus protagonistas en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, entendiéndose por éstos, los reconocidos en las

Constituciones Federal y locales, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en las leyes que de aquellas emanen."

"Registro: 2003351
"Época: Décima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tipo de Tesis: Aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013
"Materia: Penal
"Tesis: IV.2o.P.5 P (10a.)
"Página: 2255

"PROCEDIMIENTO ABREVIADO. SU TRAMITACIÓN NO EXIME AL JUZGADOR DE LA OBLIGACIÓN DE VALORAR LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS QUE EXISTAN EN LA CAUSA PENAL AL DICTAR LA SENTENCIA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).—Cuando el inculpado se acoge al procedimiento abreviado a que se refiere el artículo 601 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, es necesario que en su trámite manifieste con anuencia de su defensor, entre otras cosas, que no tiene pruebas que ofrecer o desista de las ofrecidas, salvo las relativas a la individualización de la pena. Sin embargo, ello no exime al juzgador de la obligación de valorar los restantes elementos de prueba que existan en la causa penal al dictar la sentencia respectiva, pues es necesario que lo haga en su totalidad, a efecto de que precise con cuáles acreditó el hecho probado y si éste materializó el ilícito, así como la plena responsabilidad del inculpado; obligación que sólo al cumplirse permite conocer si se logró el objeto de la apelación prevista en el artículo 381 del citado código, y si se respetó el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad."

Tomando en cuenta que la concesión del amparo nulifica la sentencia reclamada, deviene innecesario pronunciarse acerca de las violaciones que invoca el quejoso relacionadas con el deber de lealtad del Ministerio Público y el desahogo del reconocimiento de los coinculpados, pues al margen de que no se estimaron para emitir el fallo, no se alcanzaría mayor beneficio.

Es aplicable el criterio jurisprudencial con datos de identificación, rubro y texto, siguiente:

"Registro: 179367

"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXI, febrero de 2005
"Materia: Común
"Tesis: P./J. 3/2005
"Página: 5

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.—De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 a 76, 170, 171, 174, 188, 189 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—Para los efectos precisados, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto que reclamó de la Magistrada provisional de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mismo que quedó precisado en el resultando primero de la presente sentencia de amparo.

Notifíquese personalmente, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Marta Olivia Tello Acuña y José Martín Hernández Simental, así como el licenciado Jorge Luis Olivares López, secretario en funciones de Magistrado, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el día treinta de septiembre de dos mil catorce, con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, siendo ponente la primera de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis 1a./J. 115/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 431.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). El artículo 408 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua establece los extremos en que debe fijarse la litis en la alzada, con base en las consideraciones que las partes sometan a la potestad de la Sala Penal –constituida como Tribunal Unitario–, quedando prohibido extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas o que estén más allá de los

límites solicitados, a menos de que se trate de una lesión a los derechos fundamentales. Por su parte, en términos del artículo 414, fracción IV, del citado ordenamiento es apelable la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, redacción que se aprecia genérica, es decir, no se constriñe al fallo absolutorio, pues abarca tanto a éste como al condenatorio; por tanto, las consecuencias que dicha resolución provoque a las partes, abren la oportunidad para que la impugnen a través de la apelación y se fije la litis del recurso mencionado, la cual comprende, además de los agravios correspondientes, el acuerdo que las partes someten ante el Juez de Garantía en el procedimiento abreviado, vinculado con la aplicación del derecho que éste realiza al dictar sentencia, ya que dicha circunstancia no fue ponderada por el Constituyente como un caso de exclusión de debate en el recurso de apelación y, por ende, debe estudiarse por la alzada para resolver el conflicto surgido como consecuencia del delito y la aplicación de las penas, a efecto de cumplir con el objeto del proceso, que se traduce en la restauración de la armonía social entre sus protagonistas en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, entendiéndose por éstos, los reconocidos en las Constituciones Federal y Locales, en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano y en las leyes que de aquéllas emanen.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.1o.P.A. J/6 (10a.)

Amparo directo 387/2009. 26 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Martínez Calderón. Secretaria: Martha Cecilia Zúñiga Rosas.

Amparo directo 78/2012. 7 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jorge Erik Montes Gutiérrez.

Amparo directo 111/2012. 7 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretario: Jorge Erik Montes Gutiérrez.

Amparo directo 239/2014. 9 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretaria: Margarita de Jesús García Ugalde.

Amparo directo 202/2014. 16 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 13 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.

AMPARO EN REVISIÓN 247/2014. 12 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIA: MA. DEL CARMEN ZÚÑIGA CLETO.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Análisis de los agravios. Los formulados como tales son infundados.

Esgrime la recurrente, en lo sustancial, que para condicionar la procedencia del juicio de amparo a la observancia del principio de definitividad, la Juez de Distrito soslayó que en la demanda de garantías adujo una violación directa a la Constitución, porque destacó la ausencia de fundamentación y motivación de la multa y de su quántum, motivo por el cual, no debía agotar medio ordinario de defensa alguno.

Como se anunció, es infundado ese planteamiento.

El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dice:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, indepen-

dientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.

"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; …"

El precepto reproducido contempla la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que contra el acto administrativo proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto.

Es decir, prevé el principio de definitividad, rector del juicio de garantías en materia administrativa, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción a esa regla que se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, con violaciones directas a la Constitución Federal, con la exigencia de mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado y con la jerarquía normativa, en cuanto proscribe que se trate de un medio ordinario de defensa previsto en un reglamento y no en la ley.

Cuando se trata de violaciones directas a la Constitución, el gobernado no está obligado a cumplir con el principio de definitividad; es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, pues significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Norma Fundamental.

Lo anterior no significa que el juicio de garantías proceda en todos los casos en que el interesado exponga que se han violado sus garantías individuales previstas en la Carta Magna, sino que será necesario atender cada caso en específico, para examinar el planteamiento que se haga valer por el gobernado.

Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución, se actualizan cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que se justifica porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede cuando se atribuye infracción a la garantía de audiencia.

Fuera de las dos hipótesis señaladas, los particulares se encuentran obligados a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, es decir, deben atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que, de no ser así, dicho juicio será improcedente.

En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, por una parte, porque no se trata de una absoluta falta de fundamentación y motivación, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad con base en determinados preceptos legales; por otra, tal medio de impugnación permite al interesado expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 104 del Tomo III, Materia Administrativa, Jurisprudencia SCJN, del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, con el rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN."

En el caso, en el primer concepto de violación, la parte recurrente adujo violación al artículo 16 constitucional y, en el segundo, al 14; al efecto, en ambos apartados expuso la siguiente alegación:

"El mandamiento de ejecución y el embargo emitidos por la responsable omiten señalar y precisar las circunstancias, hechos y circunstancias, que fueron tomados en cuenta para determinar la multa y el monto de la misma, ya que no describen con precisión los razonamientos lógicos y jurídicos que se tomaron en cuenta para emitir la multa; de igual manera, carecen de los elementos mínimos de un acto jurídico ya que no cuentan con los datos esenciales del origen de la multa, ya que solamente refieren los datos de una resolución, sin embargo no precisan el origen de tal determinación, motivo

por el cual violan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que con tales actos no me es posible realizar una adecuada defensa en favor de mi representada, por lo que los actos que se recurren violan en mi perjuicio el mandamiento constitucional que se cita, en consecuencia, debe otorgárseme el amparo y protección de la Justicia Federal."

Además, en el punto tres de la relatoría de antecedentes del acto reclamado, adujo:

"3. A las diez horas del 14 de julio de 2014, se presentó el ministro ejecutor **********, en el domicilio de mi representada, el cual ha quedado precisado con anterioridad y en atención (sic) diligencia con el Sr. **********, comunicando que el motivo de la diligencia era un mandamiento de ejecución de multas administrativas estatales no fiscales y del cual se desprende que carece de motivación, ya que no precisa el motivo por el cual se sanciona a mi representada, ya que no precisa la motivación para imponer la multa de **********; meramente de manera genérica que señalan datos generales de un expediente, sin embargo, no se precisan más datos que permitan que mi representada conozca el motivo de la sanción, la autoridad emisora y cualquier circunstancia que permita una adecuada defensa.

"Acto seguido, el ministro ejecutor le concedió al Sr. ********** el uso de la voz para que señalara bienes para embargo, por lo que éste se opuso al embargo de bienes, manifestándole al ministro ejecutor que no señalaba bienes para embargo ya que el acto es contrario al Estado de Derecho e inconstitucional, comunicándole que tal como se regula en el numeral 199 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, los bienes de los Municipios son inembargables; sin embargo, esta circunstancia no fue atendida por la responsable, ministro ejecutor de la oficina recaudadora en Valle de Santiago …"

Como puede observarse, esas disidencias no constituyen un auténtico planteamiento en el que sólo proponga violación directa a algún precepto constitucional, pues lo que aduce es que lo asentado en la diligencia de requerimiento de pago y embargo es insuficiente para conocer el motivo por el cual se le impuso la multa, porque sólo se indican los datos de un expediente, de una resolución, pero no se precisa el origen de esa sanción, aunado a que el embargo se trabó sobre bienes inembargables.

Lo primero se traduce en un planteamiento de insuficiente motivación y no de su falta de expresión, de lo cual resulta que lo que hace valer no es una violación directa a la Constitución, sino un problema de legalidad, misma

naturaleza que tiene el tópico relativo al carácter inembargable de los bienes del **********.

Además, al imponerse de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de catorce de julio de dos mil catorce (folio 10 del expediente de amparo), se observa que no carece de fundamentación y motivación, al ser patente la cita de diversos preceptos legales y reglamentarios invocados por el ejecutor, así como los datos del acto a ejecutar, a saber: la resolución ********** de nueve de junio de dos mil catorce, notificada en la propia fecha, así como la autoridad que la emitió (conciliación y arbitraje) y su contenido (multa administrativa no fiscal determinada en la resolución: **********).

Por lo que, se reitera, la suficiencia de los datos de identificación de la resolución ejecutada y la naturaleza inembargable de los bienes es un tema de legalidad, no una violación directa a la Constitución.

En consecuencia, si lo que el quejoso plantea en esta instancia es que el sobreseimiento decretado conforme a la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, es indebido, porque en su caso se aducía falta de fundamentación y motivación, dicho agravio debe considerarse infundado, porque conforme a lo dicho, en la demanda de amparo esgrimió insuficiente fundamentación y motivación, pero es sólo la ausencia total de esas exigencias del acto de autoridad o la alusión a una violación directa a la Constitución lo que haría aplicable la excepción al principio de definitividad invocado por la Juez Federal.

Por ende, como lo resolvió la a quo, la parte quejosa debió agotar el medio de defensa que la ley establece para tal efecto, como es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que son competentes las Salas para conocer de los procedimientos administrativos que se promuevan en contra de actos y resoluciones jurídico administrativos que las autoridades estatales y municipales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, conforme a los numerales 255, fracción I y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues a través de tal medio ordinario de impugnación, estuvo en condiciones de aportar elementos de convicción para demostrar la ilegalidad de los actos impugnados y obtener su nulidad.

Lo anterior, de acuerdo con las razones que informan la tesis XVI.1o.A.39 A (10a.), emitida por este tribunal federal, en su anterior denominación, publicada en la Décima Época de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 2100, del contenido siguiente:

"PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.—Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primer ordenamiento, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268 en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar

con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo."

Así, al resultar infundado el único agravio esgrimido en el presente recurso, lo procedente es confirmar la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 93 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—Queda firme, por falta de impugnación, el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, en relación con el acto reclamado consistente en el mandamiento de ejecución de cuatro de julio de dos mil catorce, emitido por el **********, para hacer efectiva una multa no fiscal impuesta por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato al ********** quejoso.

SEGUNDO.—Se confirma la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil catorce, pronunciada por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Irapuato, Guanajuato, en el juicio de amparo número ********** de su índice.

TERCERO.—Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de catorce de julio de dos mil catorce, reclamado del ministro ejecutor **********.

Notifíquese; anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ariel Alberto Rojas Caballero, Víctor Manuel Estrada Jungo y Enrique Villanueva Chávez, siendo ponente y presidente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta

que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A. J/19 (10a.)

Amparo en revisión 196/2013. Jorge Salvador Rodríguez Rodríguez, su sucesión. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.

Queja 47/2014. Biotek Power, S.A. de C.V. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.

Amparo en revisión 132/2014. Héctor Mario Martínez Arrona. 4 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.

Queja 122/2014. Ana Bertha Mancera Jiménez. 13 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Paula Cecilia Romero Moya.

Amparo en revisión 247/2014. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

RELACIÓN DE TRABAJO. CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE SU NEGATIVA.

AMPARO DIRECTO 731/2014. 16 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO RIVERA. SECRETARIO: JOAQUÍN ZAPATA ARENAS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa conducen a determinar lo siguiente:

En su primer concepto de violación y en parte del segundo, la impetrante de amparo sostiene que el laudo vulnera en su perjuicio los principios de congruencia, exhaustividad y legalidad, debido a que absuelve a ********** y a **********, de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, sin considerar el desahogo de la inspección ofrecida como prueba, de la que se advierte que la citada empresa sólo exhibió parte de los documentos que le fueron exigidos para el desahogo de la citada probanza y el codemandado físico no presentó ninguno de ellos, por lo que se le tuvieron que tener por presuntivamente ciertos los hechos a demostrar, en términos del artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo y, con ello, tener por acreditada la existencia del vínculo laboral de los citados codemandados con la actora; amén de que el codemandado físico jamás negó contar con trabajadores, por lo que estaba obligado a exhibir los documentos que le fueron requeridos.

Añadió que la Junta responsable, de manera indebida, le restó valor probatorio a la documental consistente en el libro de Derecho Ambiental de **********, serie de textos universitarios con casos prácticos, publicado por ********** del que se desprende que se trata de un documento proveniente de la citada codemandada y en el que se aprecia que la actora aparece como parte del comité editorial, con lo que demuestra el vínculo laboral que existió con la citada persona moral.

Los conceptos de violación antes sintetizados resultan infundados, conforme a las siguientes consideraciones:

De las constancias que integran el expediente laboral **********, se advierte que ********** demandó de **********, ********** y **********, su indemnización constitucional y pago de salarios caídos, entre otras prestaciones, al alegar que fue despedida de manera injustificada de su empleo.

Como hechos que sustentan su acción, la demandante refirió que ingresó a laborar para los demandados el diecinueve de julio de dos mil siete, con el puesto de **********, en una jornada de las ocho a las diecisiete horas, con una hora diaria para descansar y tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo, de lunes a viernes, con descanso los sábados y domingos y un salario de $ ********** (**********) mensuales que le cubría **********, aunque de manera adicional, ********** le entregaba de manera quincenal, la

cantidad de $ ********** (**********), en efectivo, por lo que su salario ordinario quincenal, ascendía a $ ********** (**********), haciéndole firmar las citadas empresas dos nóminas de pago.

Refirió que prestó sus servicios en **********, número **********, colonia **********, sección **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal, que corresponde a las instalaciones de **********; sin embargo, los beneficiarios directos de sus servicios eran ********** y el codemandado físico **********; que los citados demandados conforman el ********** y que dentro de las funciones que le asignaron a su puesto de **********, se encontraba la de asistir al coordinador de la línea jurídica **********, para la publicación de diversas series y colecciones, donde la actora aparece como parte del comité editorial y destacó que la comunicación, instrucciones, revisiones, correcciones y entrega de su trabajo a la citada editorial, se efectuaba a través de medios electrónicos, fundamentalmente, por el sistema de intranet de la demandada, por llamadas telefónicas y acudiendo a sus oficinas centrales, localizadas en la calle de **********, número **********, colonia **********, delegación **********, Distrito Federal.

Respecto al despido atribuido a los demandados refirió que el doce de abril de dos mil once, aproximadamente a las trece horas, su jefe inmediato, el doctor **********, encargado de la coordinación de la línea jurídica de la editorial codemandada y quien ejerce actos de dirección y administración, se comunicó con la actora vía telefónica, para indicarle que por instrucciones del propietario de las empresas demandadas, **********, daba por terminada la relación de trabajo, una vez que concluyera la primera quincena de abril de dos mil once, por lo que tenía que acudir a las oficinas centrales, ubicadas en la calle de **********, número ********** –**********–, colonia **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal, a firmar los documentos correspondientes y a que se le hiciera el pago de la quincena respectiva.

En cumplimiento a la citada instrucción, el quince de abril de dos mil once, aproximadamente a las doce horas, acudió a las oficinas centrales de los demandados y se entrevistó con el dueño de la editorial **********, quien le informó que por el momento se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios, confirmándole que ese sería su último día de trabajo y la invitó a que acudiera con el contador de la empresa, para que le hiciera el pago de los salarios y prestaciones adeudadas; sin embargo, sólo le hicieron el pago de $ ********** (**********) y le pidieron que se retirara, sin que se le hubiera hecho entrega del aviso por escrito, a que se refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.

Al contestar la demanda iniciada en su contra ********** y **********, nombre correcto y completo del codemandado físico, negaron acción y derecho a la actora para demandar las prestaciones que refiere, debido a que nunca existió relación de trabajo con la demandante, por lo que eran falsos todos los hechos que se les atribuyen.

Por cuanto hace a la codemandada **********, aceptó el vínculo laboral atribuido, pero negó la existencia del despido atribuido ya que, incluso, el quince de abril de dos mil once, ********** se encontraba en un domicilio diverso al que señala la actora.

Para acreditar la procedencia de su acción, la actora ofreció como pruebas, entre otras, la inspección ocular, en los siguientes términos:

"… 5. La inspección ocular que ofrezco de conformidad con los artículos 827 y demás relativos y aplicables del ordenamiento laboral, por lo cual procedo a cumplir con los requisitos para su ofrecimiento: a) La inspección deberá desahogarse sobre los siguientes documentos: contrato de trabajo, listas de raya, nóminas de pago, listas o nóminas de pago en efectivo, listas de asistencia registro de asistencia, tarjetas de asistencia, tarjetas checadoras, recibos de pago, comprobantes de pago, constancias de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y SAR, constancias de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y SAR, así como en la obra publicada por la demandada **********, que lleva por título Derecho Ambiental, por **********, serie de textos universitarios con casos prácticos; b) el periodo de la inspección deberá abarcar del 19 de julio de 2007 al 15 de abril de 2011; c) el objeto de la inspección consiste en que el fedatario, teniendo a la vista todos los documentos requeridos, proceda a desahogar los puntos que a continuación precisamos para demostrar la veracidad de todos los hechos de nuestro escrito de demanda; d) esta prueba la ofrecemos para acreditar la veracidad de todos los hechos que señalamos en nuestra demanda y para demostrar la procedencia de nuestras prestaciones; e) esta prueba está relacionada con todos y cada uno de los hechos del escrito inicial de demanda; f) esta prueba la ofrecemos para que el C. Actuario dé fe y haga constar los siguientes extremos:

"1. Que la actora **********, ingresó a prestar sus servicios para los demandados a partir del 19 de julio de 2007;

"2. Que el horario de labores que desempeñaba **********, comprendía de las 8:00 a la 17:00 horas, con una hora diaria para descansar y tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo de lunes a viernes de cada semana;

"3. Que los demandados pactaron con la actora que su descanso semanal comprendería los días sábados y domingos de cada semana;

"4. Que el salario nominal quincenal de **********, era por la cantidad mensual de $ **********, pagadero quincenalmente por la cantidad de $ **********;

"5. Que adicionalmente al salario nominal, por cuenta directa de la **********, quincenalmente, ésta hacía entrega a la actora de la cantidad de $ **********, en efectivo, mediante la firma en el listado correspondiente de la editorial;

"6. Consecuentemente, que el salario ordinario quincenal de la actora era por la cantidad de $ **********;

"7. Que la actora firmaba dos nóminas quincenales, una correspondiente a la cantidad entregada vía nómina por ********** y la otra por concepto de pago hecho en efectivo en las nóminas de **********;

"8. Que los demandados asignaron a la actora como centro de trabajo el ubicado en **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, México, D.F.;

"9. Que dentro de las funciones que le asignaron a su puesto de ********** se encontraban las de asistir al coordinador de la línea jurídica de **********, para la publicación de diversas series y colecciones;

"10. Que en el libro de Derecho Ambiental, por **********, serie de textos universitarios con casos prácticos, **********, consta que la actora aparece como parte del comité editorial de la obra;

"11. Que los demandados pagaban a la actora la cantidad quincenal de $ ********** en efectivo;

"12. Que los demandados otorgaban a la actora un descuento del 30% sobre la compra de los trabajos editados y comercializados por ********** y el precio resultante era pagado por la trabajadora, vía descuento quincenal en los pagos realizados a través de **********;

"g) Finalmente señalamos como domicilio para la realización de la inspección el ubicado en el lugar de los emplazamientos, es decir, el ubicado en **********, número **********, **********, **********, delegación

**********, C.P. **********, México, D.F.; solicitando que por economía procesal se desahogue en el local de esa H. Junta, en atención a que ésa es la forma en que los demandados deben cumplir la obligación legal de exhibir en juicio los documentos indicados, más aún porque esa obligación se encuentra acogida por la jurisprudencia obligatoria…" (fojas 68 y 69 del expediente laboral).

En proveído de tres de octubre de dos mil once, se admitió como prueba la referida inspección, hecha excepción del inciso 1), debido a que el dato a verificar se encontraba fuera del periodo señalado en la propia prueba (foja 78 del expediente laboral).

Dicha probanza se desahogó el veintinueve de febrero de dos mil doce, al tenor de la siguiente acta:

"… En México, D.F., siendo las diez horas del día veintinueve de febrero de dos mil doce, me constituí en el local de esta H. Junta en cumplimiento al auto de fecha tres de octubre de dos mil once, en donde se ordena el desahogo de la inspección ofrecida por la actora en su ofrecimiento de pruebas apartado 5; llamadas las partes en voz alta y por tres veces comparecen, por la parte actora su apoderado legal Lic. ********** y por la demandada su apoderado legal Lic. **********, con personalidad acreditada en autos, a quienes les entero el motivo de la diligencia, por medio de la lectura íntegra y en voz alta del auto de fecha antes citado; enterados del motivo de la diligencia, requiero al apoderado de la demandada la siguiente documentación base de la inspección: Contrato de trabajo, listas de raya, nóminas de pago de salarios, nóminas de pago de prestaciones legales, nóminas de pago, listas o nóminas de pago en efectivo, listas de asistencia, registros de asistencia, tarjetas de asistencia, tarjetas checadoras, recibos de pago, comprobantes de pago, constancias de alta ante el IMSS, Infonavit y SAR, constancias de baja ante el IMSS, Infonavit y SAR, así como la obra publicada por la demandada **********, que lleva por título Derecho Ambiental, por **********, serie de textos universitarios, con casos prácticos por un periodo de un año anterior a la demanda. En uso de la palabra, el apoderado de la demandada dijo: que por lo que hace a la moral demandada **********, en este acto pongo a la vista la documental consistente en listas de nómina originales correspondientes al periodo comprendido del primero de abril de dos mil diez al quince de abril de dos mil once y que obran agregados a los autos, y por lo que hace a la moral demandada **********, se exhibe la documentación consistente en recibos de pago originales, recibos de pago, listas de nóminas de sueldo, contratos individuales de trabajo, movimientos de los trabajadores ante el IMSS, por el periodo solicitado, documentación de la que se desprende, como

se dijo al contestar la demanda, entre **********, y el hoy actor jamás existió relación de trabajo, y por lo que hace al codemandado físico **********, se exhibe su inscripción en el RFC del Servicio de Administración Tributaria, de la que se desprende que esta persona se dedica a funciones totalmente distintas a las que se tratan en el presente asunto y como se dijo al dar contestación a la demanda, entre esta persona y el actor, jamás existió relación de trabajo, la suscrita hace constar y da fe de tener la documentación exhibida y procede al desahogo de la inspección ofrecida por la actora en su ofrecimiento de pruebas apartado 5; 1) Por lo que hace a este inciso fue desechado por esta H. Junta; inciso 2) Este inciso no se puede desahogar, en virtud de que no se exhibe documento alguno; inciso 3) Este inciso no se puede desahogar en virtud de que no se exhibe documento alguno; inciso 4) De la documentación exhibida se desprende el pago de ********** quincenales; inciso 5) No se exhibe documentación para el desahogo de este inciso; inciso 6) De la documentación exhibida por **********, aparece la cantidad de $ ********** quincenales; inciso 7) Este inciso no se puede desahogar en virtud de que la documentación que exhibe ********** no aparece ninguna firma; inciso 8) No se puede desahogar en virtud de que no se exhibe documento alguno para el desahogo de este inciso; incisos 9), 10), 11) y 12) No se pueden desahogar estos incisos porque no se exhibe documento alguno para su desahogo. Procedo al desahogo de la inspección ofrecida por la actora en su ofrecimiento de pruebas, apartado 5, por lo que hace a **********. Inciso del dos al doce no se pueden desahogar en virtud de que de la documentación exhibida no aparece el nombre de la hoy actora **********; acto seguido, procedo con la inspección ofrecida por la actora en su ofrecimiento de pruebas, apartado cinco, por lo que hace al codemandado físico **********, los incisos dos al doce, estos incisos no se pueden desahogar, en virtud de que no se exhibe documento alguno para el desahogo de estos incisos; de los incisos desahogados hago constar y doy fe. En uso de la palabra, el apoderado de la actora dijo: Que en primer lugar me opongo al periodo de inspección que tuvo que acordar esta H. Junta al admitir la presente prueba de inspección por ser ajena al objeto de la prueba y por ser ilegal por lo que la prueba de inspección deberá ser desahogada por todo el periodo de tiempo de inspección ofrecido en términos del numeral cinco del escrito de pruebas de la actora; ahora, por lo que hace a la documentación exhibida por la demandada **********, se hace notar y se le pide a la C. Actuaria que dé fe, haga constar y certifique que no tiene firma de la actora, además de que no exhibe ninguna documentación materia de la presente inspección; de igual forma, por lo que hace a la codemandada **********, se hace notar y se le pide a la C. Actuaria actuante que dé fe, haga constar y certifique que la documentación exhibida no tiene ninguna relación con la materia de la inspección ni cuenta con nombre y firma de la actora, lo que acontece por igual con el codemandado físico

**********, por lo que la documentación exhibida se objeta en cuanto a su alcance y valor probatorio y por lo que visto que la parte demandada se encontraba debidamente notificada del desahogo de la presente inspección atento a las constancias de autos y visto que la parte demandada no exhibe documentación alguna, no obstante que por ley tiene la obligación de conservar y en su caso de exhibir, acorde con lo dispuesto por el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo y toda vez que las demandadas no exhiben la documentación referente a todo el periodo de prueba de la inspección ofrecida, en los términos marcados con el numeral cinco del escrito de pruebas de la parte actora, con fundamento a su vez por los artículos 803, 804, 806, 828 y 829 de la ley de la materia, solicito se le haga efectivo el apercibimiento decretado en autos con fecha 3 de octubre de 2011, teniéndosele por presuntivamente ciertos los hechos que con dicha prueba se pretenden acreditar y con los cuales se acreditan los doce extremos que acompañan al escrito de pruebas de la actora en el apartado cinco, referente al desahogo de la presente inspección; asimismo, se le reitera y se le pide que la actuaria dé fe y haga constar que la parte demandada no exhibe documentación alguna referente al periodo, objeto y materia de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora la cual se encuentra admitida. En uso de la palabra el apoderado de la demandada dijo: Que solicita sean desechadas las manifestaciones de mi contraparte toda vez que la parte que represento ha cumplido en todo momento con lo solicitado por esta H. Junta. Con las manifestaciones hechas por las partes para los efectos legales a que haya lugar, se da por terminada la presente diligencia, dando cuenta a esta H. Junta para los fines legales conducentes a que haya lugar, haciendo constar que la documentación que exhibe por **********, carece de firma de la hoy actora firmando al margen por los comparecientes y al calce la suscrita quien da fe de lo actuado. Doy fe. La C. Actuaria (firma ilegible) ********** …" (fojas 133 y 134 del expediente laboral). Lo subrayado es del tribunal.

En audiencia de veinte de marzo de dos mil doce, la Junta responsable tuvo por desahogada la inspección en comento y manifestó que "… en relación al (sic) incisos 2), 3), 5), 8), 9), 10), 11) y 12), toda vez que la demandada **********, no exhibió los documentos para desahogar esos incisos, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto admisorio de pruebas, teniéndose por presuntivamente ciertos los hechos que el actor pretende probar con los mismos, con fundamento en los artículos 784, 804, 828 y 829 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que hace a **********, se tiene por desahogada dicha prueba y por lo que hace al codemandado físico **********. Toda vez que no exhibió los documentos para desahogar la inspección a éste se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto admisorio de pruebas, teniéndose por presuntivamente ciertos los hechos que el actor pretende pro-

bar con los mismos, con fundamento en los artículos 784, 804, 828 y 829 de la Ley Federal del Trabajo …" (foja 154 del expediente laboral).

En el laudo que constituye el acto reclamado, la Junta responsable absolvió a ********** y **********, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, toda vez que la actora, con ninguna de las pruebas aportadas, acreditó el vínculo laboral que les atribuye, amén de que con la instrumental de actuaciones, se aprecia que la relación de trabajo se dio con ********** (foja 184 del expediente laboral).

Determinación que se estima objetivamente acertada, toda vez que la inspección ocular y el libro de texto ofrecidos como pruebas, resultan insuficientes para acreditar el vínculo de trabajo entre la actora ********** y los demandados ********** y **********.

Es conveniente precisar que el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo define la relación de trabajo de la siguiente manera:

"Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

"Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.

"La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos."

Del precepto transcrito, se advierte que existe una relación laboral, cuando se cumplen los supuestos siguientes:

a) La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona; y,

b) El pago de un salario como retribución del esfuerzo físico o intelectual o de ambos.

En ese sentido, el elemento esencial de la relación de trabajo, que permite distinguirla de otra relación jurídica, es el de la subordinación en la prestación del servicio, la cual se traduce en la facultad del patrón de disponer de la fuerza de trabajo del obrero de acuerdo con la ley o el contrato.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 357 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 342, Tomo VI, Séptima Época del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-septiembre de 2011, con el rubro y texto siguientes: "SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. La sola circunstancia de que un profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, no entraña necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio, de acuerdo con el artículo 134, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estará subordinado el trabajador en todo lo concerniente al trabajo."

Cabe indicar que si los demandados ********** y **********, negaron la relación de trabajo con la accionante, correspondía a ésta probar su existencia.

Ello, de conformidad con la tesis aislada I.6o.T.593 L, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 653, Tomo XIII, junio de 1994, Octava Época del *Semanario Judicial de la Federación*, que enseguida se transcribe: "RELACIÓN DE TRABAJO, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE NEGATIVA DE LA.—Cuando el demandado, como patrón, niega la relación de trabajo, corresponde al actor demostrar su existencia, en virtud del principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones."

En ese orden de ideas, debe decirse que contrario a lo que afirma la quejosa, la inspección ocular y el libro de texto ofrecidos como prueba, resultan insuficientes para acreditar el vínculo de trabajo con ********** ya que, en su caso, no operó la presunción a que se refiere el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo, como quedó establecido en el proveído de veinte de marzo de dos mil doce, dado que la citada persona moral presentó en la diligencia de desahogo, la documentación que tenía en su poder, consistente en recibos de pago originales, listas de nóminas de sueldo, contratos individuales de trabajo y movimientos filiatorios de sus trabajadores, por el periodo solicitado, en los que no aparecía el nombre de la ahora quejosa, por lo que no se le podían tener por presuntivamente ciertos los hechos a demostrar con dicha prueba, respecto de la citada empresa, dado que jurídica y mate-

rialmente se encontraba imposibilitada para mostrar los documentos que la oferente le requería, al no utilizar sus servicios, como lo sostuvo en su ocurso de contestación.

Sin que baste para acreditar la existencia del vínculo de trabajo, la presentación del libro de Derecho Ambiental que obra en el legajo de pruebas, dado que del mismo no se advierten datos suficientes que, de manera fehaciente y eficaz, prueben la existencia de una subordinación, el pago de una retribución por sus servicios, por parte de dicha sociedad, ni que estuviera sujeta a una jornada de trabajo, elementos esenciales de un vínculo laboral, sin que aportara otras pruebas que corroboraran dicha circunstancia, más aún si se considera que la demandante refirió que la comunicación, instrucciones, revisiones, correcciones y entrega de su trabajo con la citada editorial, lo hacía a través de medios electrónicos, fundamentalmente, por el sistema de intranet de la demandada.

En cuanto al codemandado físico **********, si bien es cierto, la Junta responsable determinó mediante proveído de veinte de marzo de dos mil doce, tenerle por presuntivamente ciertos los hechos que la actora pretendía probar, respecto del citado codemandado, en términos de los artículos 784, 804 y 828 de la Ley Federal del Trabajo, debido a que no exhibió los documentos requeridos para desahogar la prueba; dicha presunción queda desvirtuada con el material probatorio aportado por la propia accionante, consistente en los comprobantes de pago de la primera quincena de enero a la primera de abril, todos de dos mil once, en los que se aprecia como su patrón, la empresa **********; una carta de treinta y uno de mayo de dos mil diez, suscrita por la gerente de Recursos Humanos de la citada persona moral, en la que comunica a la Embajada de Canadá, que la actora colabora con dicha empresa desde el diecinueve de julio de dos mil siete y las constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados y crédito al salario (incluye ingresos por acciones) a nombre de la actora **********, relativos a los ejercicios fiscales 2007 y 2008, en las que aparece como retenedor de la contribuyente, la empresa ********** y no otra diversa (folios 1 a 9 del legajo de pruebas), ente que por cierto, aceptó expresamente la relación laboral y ofreció el trabajo a la demandante, aquí quejosa.

De lo que se colige que fue legal el proceder de la responsable de restar valor demostrativo a la inspección y libro de texto aportados por la actora, a fin de acreditar el nexo de trabajo negado de manera lisa y llana por los codemandados ********** y **********, dado que los mismos no resultan eficaces para acreditar de manera veraz el referido nexo de trabajo,

además de que no se encuentran corroborados con diversos medios de convicción que los tornen eficaces, por lo que la absolución decretada respecto de dichos codemandados se considera adecuada, ya que no debe perderse de vista que de conformidad con el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad laboral tiene el deber de resolver el fondo del asunto a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 279 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 224, Tomo V, Materia de Trabajo, Volumen 1 del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS, PRUEBA DE, NO EFECTUADA. PRESUNCIONES.—Para que puedan tenerse por ciertos los hechos que una de las partes trató de probar mediante una inspección de documentos, que no se llevó a cabo por negarse su contraria a exhibirlos, es necesario que esos hechos no estén contradichos por prueba alguna existente en autos, pues ante la existencia de esta última prueba, la presunción queda desvirtuada."

En otra parte de su segundo concepto de violación, la quejosa aduce que la Junta responsable, de manera ilegal, absuelve del pago de las horas extras reclamadas, bajo el razonamiento de que la jornada de trabajo no rebasaba los límites legales, sin considerar que desde que se presentó la demanda se manifestó que contaba con una hora diaria de lunes a viernes para tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo, por lo que dicho tiempo debía tomarse en cuenta como tiempo efectivo de trabajo y pagarse como lo prevé el artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo y, por ello, procedía la condena al pago de las horas extras reclamadas.

El citado concepto de violación resulta infundado, conforme a lo siguiente:

En su demanda laboral, la actora **********, reclamó el pago de horas extras, por todo el tiempo que duró la relación de trabajo, al señalar en el hecho uno de su demanda laboral, que trabajaba para la parte demandada, con el puesto de **********, con una jornada de las ocho a las diecisiete horas de lunes a viernes, con una hora diaria para descansar y tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo y con descanso los sábados y domingos, de cada semana, por lo que considera que al haber permanecido dentro de su centro de trabajo durante su descanso, ese lapso debe ser considerado como tiempo efectivo de su jornada de labores, en términos del artículo 64 de la Ley Federal del Trabajo y, por ello, debe ser pagado como tiempo extraordinario.

Tan es así, que reclamó también la nulidad de los comprobantes de pago quincenal, que supuestamente los demandados le hacían firmar, en los que se asentaba la leyenda: "**Estoy de acuerdo con las percepciones y descuentos que se precisan en este documento, donde mi jornada laboral fue de 8:30 a 18:00 hrs., de lunes a viernes, con una hora de comida fuera de la empresa, sin que a la fecha me adeuden cantidad alguna**" (foja 3 del expediente laboral. El subrayado es del tribunal), dado que dicha jornada era falsa, además de que el periodo de descanso le fue otorgado, pero dentro de las instalaciones de la demandada.

Al responder la demanda iniciada, el codemandado **********, quien reconoció el vínculo laboral atribuido, negó la procedencia del pago de horas extras reclamadas, debido a que la actora se tomó su hora de descanso fuera de la negociación demandada y al controvertir el hecho uno de la demanda, la citada empresa manifestó que era falso el horario que indicó su contraria, toda vez que sus actividades las realizó dentro de una jornada que comprendía de las ocho a las diecisiete horas, de lunes a viernes, con una hora diaria intermedia para descansar y tomar sus alimentos fuera de la fuente de trabajo, descansando los sábados y los domingos.

Del material probatorio aportado, destaca la inspección ocular ofrecida por la parte actora, en cuyo punto 2, "**Que el horario de labores que desempeñaba **********, comprendía de las 8:00 a las 17:00 horas, con una hora diaria para descansar y tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo de lunes a viernes de cada semana**" (foja 68 del expediente laboral), la cual se desahogó el veintinueve de febrero de dos mil doce y en la que la fedataria judicial hizo constar que ese inciso no se podía desahogar, en virtud de que no se exhibió documento alguno por parte de ********** (foja 133 del expediente laboral), por lo que la Junta responsable en audiencia de veinte de marzo de dos mil doce, le hizo efectivo a la citada empresa el apercibimiento con el que lo conminó y le tuvo por presuntivamente ciertos los hechos a demostrar con la citada inspección (foja 154 del expediente laboral).

En el laudo que constituye el acto reclamado, la Junta responsable absolvió del pago de las horas extras reclamadas, bajo el razonamiento de que la propia actora precisa que laboraba de las ocho a las diecisiete horas de lunes a viernes, lo que hace un total de cuarenta y cinco horas a la semana, que no excede en ninguna forma, la máxima que señala la Ley Federal del Trabajo de cuarenta y ocho horas (fojas 183 y 184 del expediente laboral).

Afirmación que se estima objetivamente acertada, debido a que del material probatorio aportado por las partes quedó demostrado que la actora trabajó de las ocho a las diecisiete horas de lunes a viernes, lo que hace un total de cuarenta y cinco horas a la semana, que no excede la jornada máxima de cuarenta y ocho horas semanales y, si bien, ello implica una jornada diurna diaria de nueve horas, no puede considerarse que la misma contravenga el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que la duración máxima de la jornada diurna será de ocho horas, habida cuenta que esa jornada puede verse legalmente excedida, pues el diverso numeral 59 del mismo ordenamiento, prevé que la jornada relativa al sábado o la tarde de éste, pueda repartirse entre los restantes cinco días de la semana, ya que la finalidad de ese precepto es permitir al obrero el descanso del sábado o la tarde del mismo o, incluso, una modalidad equivalente.

Además de que, como ya se señaló, la jornada diurna semanal que nos ocupa respeta el principio constitucional de duración máxima de cuarenta y ocho horas, ya que comprende nueve horas diarias, cinco días a la semana, es decir, un equivalente a cuarenta y cinco horas semanales; sin que la demandante haya manifestado en su demanda laboral, que se hubiere pactado inicialmente que el periodo de descanso se gozara fuera del centro de trabajo y que, posteriormente, se hubiere modificado de manera unilateral dicha condición, para establecerse que se otorgaría dentro del lugar de trabajo, para que en este caso, sí se pudiera estimar ese periodo como tiempo extraordinario y tener derecho al pago correspondiente.

Fortalece lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 174/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 201, que dice: "JORNADA SEMANAL. EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS QUE LA CONFORMAN, SE PRESUME LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.—En virtud de que el contrato de trabajo es un acto consensual, para cuya validez la ley no exige formalidad alguna, y de que el citado precepto legal permite una jornada especial que podrá exceder de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta; cuando en el juicio no existe conflicto respecto del desempeño en esa jornada, que excede de la jornada diaria mayor pero respeta el principio constitucional de duración máxima de la jornada diurna semanal de cuarenta y ocho horas, deberá presumirse que las partes acordaron tal evento, independientemente de que exista un convenio escrito, bastando la prueba del hecho de que así se ha desempeñado el trabajo sin inconformidad expresa del trabajador, pues ello implica la aplicación de las modalidades previstas

en el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, de existir desacuerdo entre las partes respecto del reparto de tal jornada, corresponde al patrón demostrar ese hecho mediante los medios de prueba respectivos, por disposición expresa del artículo 784, fracción VIII, de la ley citada, que le obliga a demostrar la duración de la jornada de trabajo."

Así como la jurisprudencia 2a./J. 175/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 201, bajo el rubro y texto siguientes: "JORNADA DE TRABAJO. ES LEGAL LA QUE REBASA EL MÁXIMO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61, CONFORME AL DIVERSO 59, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.—De la interpretación de los artículos 58 a 61 de la indicada ley, se advierte que la duración máxima de la jornada de trabajo prevista en el artículo 61 podrá verse excedida legalmente, ya que el artículo 59 permite que la relativa al sábado o la tarde de éste, pueda repartirse entre los restantes cinco días de la semana, es decir, deberán sumarse las horas que corresponden al sábado o a la tarde del mismo, a las horas que corresponden a cada día de la semana; de ahí que dicha jornada diaria podrá exceder de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta, pues la finalidad del indicado artículo 59 es permitir al obrero el descanso del sábado o la tarde del mismo, o inclusive, una modalidad equivalente."

En otro fragmento de su segundo concepto de violación, la impetrante de amparo sostiene que la autoridad laboral, de manera indebida, le resta valor probatorio a la confesional para hechos propios a cargo de **********, a quien se le tuvo por confeso ficto de las posiciones formuladas, bajo el argumento de que la confesional sólo causa perjuicio a quien la realiza, sin considerar que dadas las funciones de dirección y administración que el confesante realizaba al servicio de los demandados, actuaba como su representante, por lo que la presunción generada, dada su inasistencia, es suficiente para acreditar que se desempeñaba como jefe inmediato de la actora y que el doce de abril de dos mil once, aproximadamente a las trece horas le comunicó vía telefónica, cuando ésta se encontraba en su lugar de trabajo, que por instrucciones del propietario de las empresas demandadas se daba por terminada la relación de trabajo, una vez que concluyera la quincena que se encontraba en curso, con lo que quedó demostrado el despido, que tuvo sus efectos a partir del quince de abril del citado año.

Lo alegado resulta fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, en atención a las siguientes consideraciones.

Conforme al artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho y, en especial, entre otras probanzas, la confesional, estableciéndose además en el numeral 786 de la propia ley, que cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte, para que concurra a absolver posiciones y que tratándose de personas morales, la confesional se desahogará por conducto de su representante legal.

Por su parte, el artículo 787 de la legislación laboral dispone que las partes podrán solicitar se cite a absolver posiciones a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razones de sus funciones les deban ser conocidos.

En su demanda laboral la actora ********** reclamó su indemnización constitucional y el pago de salarios caídos, entre otras prestaciones, al alegar que fue objeto de un despido injustificado.

En parte del hecho 5 de la demanda laboral, la accionante refirió lo siguiente:

"… 5. Es el caso que el día 12 de abril del año en curso (dos mil once), la actora se encontraba en su lugar de trabajo en el domicilio ubicado en el (sic) **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, México, D.F., cuando aproximadamente a las 13:00 horas, el Dr. **********, jefe inmediato de la actora en el centro de trabajo indicado, y encargado de la coordinación de la línea jurídica de **********, quien ejerce actos de dirección y administración de la fuente de trabajo, se comunicó vía telefónica con la trabajadora, manifestándole que se encontraba en las oficinas centrales de la demandada, ubicadas en calle de **********, número **********, **********, –**********–, colonia **********, delegación **********, México, D.F., C.P. **********, y acababa de salir de una reunión con el propietario de las empresas **********, para comunicarle que había recibido la instrucción del dueño de dar por terminada la relación de trabajo de la actora, una vez concluida la quincena que se encontraba en curso, por lo que el día 15 de abril de 2011, la actora tenía que acudir a dichas oficinas centrales para firmar los documentos correspondientes y para que se le hiciera el pago de la quincena …" (foja 7 del expediente laboral). Lo subrayado es del tribunal.

Para acreditar la procedencia de su acción, la actora ofreció la confesional para hechos propios, a cargo del Dr. **********, en los siguientes términos:

"... 4. Confesional para hechos propios del Dr. **********, quien deberá ser notificado personalmente por conducto de las personas que comparezcan en la audiencia de ley a nombre de cualquiera de las sociedades codemandadas; solicitando que se señale día y hora para que comparezcan a responder las posiciones que formularé a nombre de mi mandante, en relación con los hechos que son de su conocimiento por ser personales y que le imputé en el escrito inicial de demanda, apercibiéndolo que de no comparecer a pesar de encontrarse notificado, se le tendrá por confeso de las posiciones formuladas y calificadas de legales por esa H. Junta laboral.—Solicito que el absolvente para hechos propios quede notificado por conducto del apoderado de cualquiera de las sociedades demandadas, con fundamento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 874, tesis 2a./J. 205/2010, con el siguiente rubro y contenido: 'PROCEDIMIENTO LABORAL. ES VÁLIDA LA NOTIFICACIÓN A LOS ABSOLVENTES DEL PROVEÍDO QUE TIENE POR ADMITIDA LA CONFESIONAL A SU CARGO, CUANDO SE ENTIENDE CON EL APODERADO DE LA DEMANDADA.' (se transcribe). Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de la demanda y la ofrezco para demostrar la veracidad de todos y cada uno de los hechos manifestados en nuestro escrito inicial de demanda. En caso de no atender a la jurisprudencia obligatoria en agravio de los derechos de mi mandante, sin que implique consentimiento de la violación, la cual impugnaré en el juicio de amparo correspondiente, señalo como domicilio para la notificación personal del confesante para hechos propios, el ubicado en **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, México, D.F. ..." (fojas 66 y 67 del expediente laboral).

La citada prueba se admitió mediante proveído de tres de octubre de dos mil once y se desahogó el dos de febrero de dos mil doce, teniéndosele como confeso ficto de las posiciones formuladas por la parte actora, debido a su incomparecencia, desechándose las posiciones uno y tres, por resultar insidiosas y calificándose de legales el resto de las siete posiciones formuladas (fojas 78 y 100 del expediente laboral).

Las posiciones que le fueron formuladas al absolvente, para hechos propios **********, son del contenido literal siguiente:

"... 1. Que el 12 de abril de 2011, usted desempeñó, al servicio de **********, el puesto de ********** de **********; (desechada).

"2. Que el 12 de abril de 2011, usted desempeñó, al servicio de **********, el puesto de **********; (desechada).

"3. Que el 12 de abril de 2011, usted se desempeñó, al servicio de **********, en el puesto de ********** de **********; (desechada).

"4. Que usted era el jefe inmediato de la (sic) **********, en el centro de trabajo ubicado en **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, México, D.F;

"5. Que el día 12 de abril de 2011, aproximadamente a las 13:00, cuando la actora se encontraba en su lugar de trabajo ubicado en **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, México, D.F, usted, en su calidad de jefe inmediato, se comunicó vía telefónica con la actora;

"6. Que en la comunicación telefónica a que se refiere la posición anterior, le manifestó a la actora que usted se encontraba en las oficinas centrales de la demandada, ubicada en calle de **********, número **********, ********** –**********–, colonia **********, delegación **********, México, D.F., C.P. ********** y acababa de salir de una reunión con el propietario de las empresas, **********, quien le ordenó que diera por terminada la relación de trabajo de la actora;

"7. Que usted también informó a la actora que la relación de trabajo se daría por terminada una vez concluida la quincena que se encontraba en curso, por lo que el día 15 de abril de 2011, la actora tenía que acudir a las oficinas centrales para firmar los documentos correspondientes y que le hicieran pago de la quincena..." (fojas 97 y 98 del expediente laboral). El subrayado es del tribunal.

Lo anterior pone de manifiesto que al absolvente para hechos propios **********, se le declaró fíctamente confeso de que ejerce actos de dirección y administración de la fuente de trabajo, y que con ese carácter despidió a la actora el doce de abril de dos mil once, con efectos a partir del quince siguiente, lo que viene a confirmar lo manifestado por la actora en el hecho cinco de su demanda laboral, en cuanto hace a la existencia del despido.

Sin embargo, en el laudo que constituye el acto reclamado, la Junta responsable absolvió de la indemnización y demás prestaciones reclamadas

a **********, al restarle eficacia demostrativa a la confesión ficta para hechos propios a cargo del doctor **********, bajo el argumento, de que dicho reconocimiento sólo podía depararle perjuicio a la citada persona.

Conclusión que este Tribunal Colegiado de Circuito estima objetivamente incorrecta, debido a que al no concurrir ante la Junta responsable a absolver las posiciones que calificadas de legales le fueron formuladas por el trabajador, debe declarársele por confeso ficto de las mismas y de no encontrarse contradicha la confesión con alguna otra probanza, puede adquirir eficacia probatoria a fin de demostrar la existencia del despido, al tratarse de la persona que ejercía funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento demandado y que los hechos contenidos en las posiciones le eran propios y atribuidos a él, desde el escrito inicial de demanda; máxime que la demandada no realizó manifestación alguna, ni aportó prueba para acreditar la imposibilidad de dicha persona para comparecer a la diligencia o que no ejerciera las funciones de dirección y administración que le atribuía la accionante y no existir prueba alguna que desvirtuara su confesión ficta, debió considerar que quedaron demostrados los extremos pretendidos por la actora, como era la existencia del despido alegado; esto es, que el doce de abril de dos mil once, aproximadamente a las trece horas, cuando la actora se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado en **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, Distrito Federal, recibió una llamada telefónica de su jefe inmediato el doctor **********, quien ejerce además funciones de dirección y administración de la fuente de trabajo, para comunicarle que había recibido instrucciones para **dar por terminada la relación de** trabajo con la actora, una vez que concluyera la quincena que se encontraba en curso, por lo que el quince de abril de dos mil once, tenía que acudir a las oficinas centrales para firmar los documentos correspondientes y para que se le hiciera el pago de la quincena respectiva, por lo que procedía el pago de la indemnización constitucional reclamada, de los salarios caídos generados desde dicha separación, así como de las demás prestaciones accesorias de la acción principal y, al no hacerlo, vulneró los derechos fundamentales de la ahora impetrante.

Es así, ya que si para demostrar su despido el trabajador tiene a su alcance la confesión para hechos propios de quien ejerce actos de dirección y administración, dicha parte quedaría en precaria condición procesal si de antemano se destruyera el valor de la confesión ficta de referencia, con el argumento de "que sólo le puede deparar perjuicio a dicha persona", pues bastaría que después de que la patronal negara el despido, la persona a la que se le imputan los hechos del mismo, se abstuviera de comparecer a absolver posiciones, para impedir el alcance probatorio de esa probanza.

Más aún si se considera que de conformidad con lo establecido en los artículos 788, 789 y 790 de la Ley Federal del Trabajo,[1] la confesión ficta es una sanción para quien no ajuste su conducta a lo que establece la ley, y consiste en que se presumirán ciertos los hechos que se le hayan atribuido y sirve para corroborar el dicho del oferente, para lo que se requiere que no esté contradicha con otra prueba, lo que significa que no debe existir prueba en contrario, porque en ese supuesto es insuficiente para fundar una condena.

Aunado a que en términos del artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo, los directores, administradores, gerentes y, en general, quienes ejerzan actos de dirección y administración dentro de una empresa o establecimiento, tienen el carácter de representantes del patrón y lo obligan en sus relaciones con los trabajadores, por lo que los actos de aquéllos vinculan a éstos con sus empleados y, por ello, los que desplieguen en esas hipótesis no deben entenderse hechos a título personal, sino en nombre y representación de las empresas que dirigen y administran.

---

[1] "Artículo 788. La Junta ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen."
"Artículo 789. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales."
"Artículo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes:
"I. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que exhiba la parte interesada en el momento de la audiencia;
"II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las posiciones que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una confesión contraria a la verdad; son inútiles aquellas que versan sobre hechos que hayan sido previamente confesados o que no están en contradicción con alguna prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;
"III. El absolvente bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de borrador de respuestas pero se le permitirá que consulte simples notas o apuntes, si la Junta, después de tomar conocimiento de ellos, resuelve que son necesarios para auxiliar su memoria;
"IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente;
"V. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los requisitos a que se refiere la fracción II, la Junta las desechará asentando en autos el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución;
"VI. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando; pudiendo agregar las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y
"VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en ello."

Refuerza lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 60/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, materia laboral, página 525, cuyos epígrafe y contenido son: "CONFESIÓN FICTA A CARGO DE DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES O PERSONAS QUE POR SUS FUNCIONES DEBAN CONOCER DEL DESPIDO. CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE REALIZÓ SEAN CONTRADICHAS, DEBEN SER OBJETO DE LAS POSICIONES QUE SE ARTICULEN.—El artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo prevé que las partes podrán solicitar se cite a absolver posiciones a los directores, administradores, gerentes o personas que por sus funciones deban conocer los hechos que se les imputan, cuando éstos les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, debiéndose tomar en consideración que las posiciones articuladas y su absolución no deben apreciarse al margen de los hechos controvertidos, porque se entiende que la parte que absuelve ya está al tanto de los escritos que integran la litis y, por ende, para que las posiciones articuladas por el trabajador, a fin de demostrar el despido, tengan valor probatorio, no necesariamente deben expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó, si estas particularidades ya constan en la demanda o en la contestación y sobre ellas no existe duda. No obstante lo anterior, cuando se trata de una confesión ficta, las citadas circunstancias deben ser objeto de las posiciones para el mencionado efecto, cuando estando precisadas en la demanda o contestación sean contradichas, pues entonces la confesional abarcaría, además del despido, las circunstancias en que se realizó; con la salvedad de que la prueba sólo puede valorarse hasta el laudo y tendrá pleno valor probatorio si no está en contradicción con alguna otra prueba fehaciente."

En tales condiciones, al resultar el laudo reclamado conculcatorio de los derechos fundamentales de la impetrante, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, donde prescinda de considerar que la prueba confesional para hechos propios a cargo del doctor **********, únicamente le puede causar perjuicio a él mismo; y, en su lugar, establezca que al no estar contradicha con otra prueba, dicha confesión adquiere valor probatorio pleno para acreditar los extremos pretendidos, como es la existencia del despido y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, sin perjuicio de reiterar todos los demás aspectos ajenos a la concesión en esta ejecutoria.

Dados los efectos por los que se concedió la protección constitucional, resulta innecesario el estudio del resto del segundo concepto de violación, en

el que la parte quejosa refiere que, de manera incorrecta, la Junta responsable concede pleno valor demostrativo al acta administrativa de quince de abril de dos mil once, cuando de los autos laborales quedó demostrado que se trata de un documento elaborado de manera unilateral por los demandados y que existen parcialidades, inconsistencias y falsedades de sus ratificantes que le restan eficacia demostrativa a dicha prueba, ya que, de ser fundado el citado motivo de inconformidad, no podría extenderse más el espectro tutelar de la concesión otorgada.

QUINTO.—Los conceptos de violación propuestos por **********, ********** y **********, en el amparo adhesivo, son los siguientes: "ÚNICO. La Junta responsable dejó de analizar los diversos pliegos de posiciones ofrecidos y exhibidos por la parte actora, mismos que desvirtúan hasta la evidencia los hechos que afirma la misma en su escrito inicial de demanda.—Es evidente también, que dichos pliegos de posiciones contienen afirmaciones que constituyen una confesión expresa y espontánea de la parte que los exhibe.—Dichas posiciones desvirtúan en su totalidad, el despido alegado por la actora, ya que por una parte, manifiesta en su demanda haber sido despedida en un lugar y en determinada fecha y sin embargo, al articular sus respectivas posiciones, confesó que fue despedida en diversa fecha y en diverso lugar al que manifestó en su demanda, motivo por el cual se desvirtúan en su totalidad los hechos que expone en su escrito inicial de queja y esta situación, no fue debidamente analizada ni considerada por la Junta en su laudo respectivo.—Estos motivos, referidos anteriormente, que no fueron considerados por la Junta en su laudo, vienen a fortalecer de manera evidente, los argumentos que esgrimió la Junta para absolver a nuestras representadas y fortalecer también su respectivo laudo.—Independientemente de lo anterior, la Junta dejó de tomar en consideración dichos argumentos, que fueron ofrecidos como pruebas supervenientes, incluso en la etapa de alegatos, lo cual constituye una violación procesal.—Como podrá observar su señoría, en el desahogo de la prueba confesional a cargo de nuestras representadas **********, ********** y **********, el apoderado y representante legal de la parte actora, exhibió diversos pliegos de posiciones.—En el contenido de esos pliegos, podemos observar afirmaciones contundentes realizadas por la parte actora, que constituyen una confesión expresa y espontánea de su parte.—Independientemente de ello, podemos observar también que con dichas afirmaciones, la parte actora desvirtuó en su totalidad el despido que manifestó en su escrito inicial de demanda y, por tal motivo, resultaron falsos los hechos que argumentó en la misma, motivo por el cual, dicha situación viene a fortalecer la absolución que decretó la Junta en su respectivo laudo, pero que no fueron tomados en consideración en su momento.—Los pliegos de posiciones y afirmaciones a los que hice referencia, los explico a

su señoría de la siguiente manera: Es menester fundamental analizar las posiciones contenidas en los pliegos ofrecidos por la parte actora y que obran agregados en autos del expediente laboral de origen y que constituyen afirmaciones realizadas por la parte actora y, como consecuencia de lo anterior, se evidencian las irregularidades, falsedades y contradicciones en las que incurrió la parte actora en su demanda, como lo expondré a continuación.—Pliego de posiciones a cargo de ********** posición núm. 18. Que su representada despidió a la actora el día 12 de abril del año en curso, aproximadamente a las 13:00 horas.—De la posición antes mencionada, que contiene una afirmación espontánea de la parte actora, se desprenden las severas falsedades y contradicciones en las que incurrió en su demanda, como explico a continuación: 1) Que no pudo ser despedida ni el 12 de abril de 2011 ni el 15 de abril de 2011, como lo manifestó en su demanda, puesto que la actora está afirmando que el despido ocurrió el 12 de abril del año en curso (es decir, del año 2012, año en que fue exhibido el pliego) e, incluso, su pliego de posiciones lo firmó el 1 de febrero de 2012 (es decir, del año que cursaba en ese entonces).—Luego entonces, no existió ningún despido en contra de la actora, puesto que ni siquiera se había llegado al 12 de abril de 2012, toda vez que el pliego en comento fue exhibido con fecha 1 de febrero de aquel año.—2) Esta afirmación contenida en la posición número 18 del pliego antes mencionado, es más que suficiente para desvirtuar el despido de la actora, por lo que no podría aplicarse de ninguna manera, condena alguna en contra de mis representadas, respecto de indemnización constitucional y salarios caídos y refuerza el laudo emitido por la autoridad laboral.—Por otra parte y siguiendo este mismo orden de ideas, de nueva cuenta, la parte actora, en el pliego de posiciones que le formuló a **********, y en el pliego de posiciones que le formuló al codemandado físico **********, concretamente en la posición 19 de ambos pliegos, aparece la siguiente afirmación; pliego de posiciones a cargo de ********** posición Núm. 19. Que su representada despidió a la actora el día 12 de abril del año en curso, aproximadamente a las 13:00 hrs., por conducto del Dr. **********, pliego de posiciones a cargo del codemandado físico ********** posición Núm. 19. Que usted despidió a la actora el día 12 de abril del año en curso, aproximadamente a las 13:00 hrs., por conducto del Dr. **********. Es totalmente evidente que dichas posiciones constituyen una confesión expresa y espontánea de la parte actora, que desvirtuaron en su totalidad el despido del que se quejó en su demanda, así como las manifestaciones contenidas en la misma, ya que ni siquiera se había llegado, en la fecha en que se exhibió el pliego (1 y 2 de febrero de 2012), al día 12 de abril de 2012.—Dichas posiciones también desvirtúan en su totalidad el hecho 5 de la demanda de la actora y muy en especial, la supuesta instrucción de dar por terminada la relación laboral, que le imputó a **********, ocurrida el día 12 de abril de 2011, según su demanda, así como el despido que le

imputó al codemandado físico **********, ocurrido, según su dicho, el día 15 de abril de 2011.—Le hago notar a su señoría que la parte actora en el expediente de origen y quejosa en el amparo principal, no podría alegar jamás en su defensa, 'errores mecanográficos' de su parte, ya que como consta de autos, la oferente exhibió dos pliegos distintos, uno para cada persona moral demandada y otro para la persona física y en ninguno de esos dos pliegos, cuando se le dio el uso de la palabra respectivamente, para la exhibición correspondiente, jamás hizo aclaración alguna al respecto, motivo por el cual, insistimos, en dichas posiciones contenidas en los citados pliegos para cada una de las empresas demandadas y para la persona física, aparecen afirmaciones plenas que constituyen confesión expresa y espontánea de su parte y, por lo tanto, jamás ocurrió el despido que alegó en su demanda inicial y esta situación, refuerza la absolución y el laudo emitido por la Junta.—Por otro lado, la quejosa en el amparo principal incurre nuevamente en severa contradicción en su demanda, lo que arrojó como consecuencia que la relación de trabajo que le imputó a **********, quedara totalmente desvirtuada e inexistente, por lo siguiente: La parte actora, en el expediente de origen, afirmó en la posición 4 del pliego de posiciones a cargo de **********, lo siguiente: '... 4. Que su representada otorgó a la actora un salario mensual de $ **********, pagadero quincenalmente por la cantidad de $ ********** ...'. Dicha afirmación, desvirtúa las manifestaciones contenidas en la demanda de la actora, puesto que esta última manifestó en el hecho 1 de su demanda, lo siguiente: '… pero adicionalmente al salario nominal, por cuenta directa de la **********, quincenalmente hacían entrega a la actora de la cantidad de $ **********, mediante la firma en el listado correspondiente, de la editorial …'.—Por fin, ¿**********, le otorgó un salario mensual de $ **********, pagadero quincenalmente por la cantidad de $ **********, como lo afirmó en esta posición número 4, o le hacían entrega por cuenta directa de **********, de la cantidad de $ **********, quincenales, como lo manifestó en su demanda? Es evidente también que dicha afirmación acredita fehacientemente que la codemandada **********, no le asignó ni el salario que indicó la actora en su demanda, ni ningún otro salario y, como consecuencia, se llega a la conclusión de que no existió ninguna relación laboral entre la actora y esta moral demandada.—Pliego de posiciones a cargo de ********** posición Núm. 20. Que su representada sabe que cuando sucedió el despido, la actora se encontraba en su lugar de trabajo, en el domicilio ubicado en **********, Núm. **********, **********, sección **********, Del. **********, C.P. **********, **********.—Es el caso que la parte actora, en el hecho 5 de su demanda manifestó lo siguiente: '... En cumplimiento de la instrucción que le fue dada por su jefe inmediato, el día 15 de abril de 2011, aproximadamente a las 12:00 hrs., la actora acudió a las oficinas centrales de la demandada, en el lugar precisado en el párrafo que antecede (la parte actora

hizo referencia a la calle de **********, Núm. **********, **********, –**********– Col. **********, Del. **********, C.P. **********), y se entrevistó personalmente con el dueño de le (sic) editorial, **********, quien la recibió de forma cordial y educada, diciéndole que le agradecía todo su trabajo y colaboración pero que por el momento se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios confirmándole que ése sería su último día de trabajo …'.—Por fin, el despido en sí, del que se queja la actora, ¿ocurrió en **********, Núm. **********, **********, sección **********, Del. **********, como lo afirma en esta posición, o en **********, Núm. **********, Col. **********, Del. **********, como lo manifiesta en su demanda? Conclusión: La afirmación contenida en esta posición número 20, a cargo de **********, desvirtúa el despido manifestado por la actora en su demanda y, como consecuencia, es inexistente ese despido que alega.—Independientemente de lo anterior y como podrá observar su señoría, la Junta no tomó en cuenta dichos argumentos y consideraciones, que fueron incluso ofrecidos como pruebas supervenientes y dentro de la etapa de alegatos, constituyendo con ello una violación procesal que perjudica a nuestras representadas.—En tal virtud y por las consideraciones antes manifestadas, solicito se declare procedente y fundado el amparo adhesivo formulado con el presente escrito y, en su oportunidad, se declare que quede firme la absolución contenida en el laudo emitido por la Junta con fecha 6 de septiembre de 2013 y se ordene también, en su caso, se estudien detenidamente las posiciones contenidas en los pliegos que referí anteriormente y se llegue a la conclusión de que dichas posiciones contienen afirmaciones que constituyen confesión expresa y espontánea de la parte que las realizó y, como consecuencia, se desvirtúe en su totalidad el despido del que se quejó la actora que le imputó a la empresa ********** y se acredita también que jamás existió ninguna relación de trabajo con **********".

SEXTO.—Los conceptos de violación propuestos en la demanda de amparo adhesivo, conducen a determinar lo siguiente:

En una parte de sus conceptos de violación, los terceros interesados manifiestan que, de manera indebida, la Junta responsable deja de tomar en cuenta como pruebas supervenientes, las afirmaciones contenidas en los pliegos de posiciones formulados por la parte actora, que revisten el carácter de confesiones expresas y espontáneas de su parte y que desvirtúan el despido alegado en su demanda laboral, ya que señala una fecha y lugar de despido diversos al que indica en su ocurso inicial.

El citado concepto de violación resulta infundado, conforme a lo siguiente:

De las constancias que integran el expediente laboral **********, consta que ********** demandó de **********, ********** y **********, su indemnización constitucional y pago de salarios caídos, entre otras prestaciones, al alegar que fue despedida de manera injustificada de su empleo.

Como hechos que sustentan su acción, la demandante refirió que ingresó a laborar para los demandados el diecinueve de julio de dos mil siete, con el puesto de **********, con una jornada de las ocho a las diecisiete horas, con una hora diaria para descansar y tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo, de lunes a viernes, con descanso los sábados y domingos y un salario de $ ********** (**********) mensuales que le cubría **********, aunque de manera adicional, ********** le entregaba de manera quincenal, la cantidad de $ ********** (**********), en efectivo, por lo que su salario ordinario quincenal, ascendía a $ ********** (**********), haciéndole firmar las citadas empresas dos nóminas de pago.

Abundó que prestó sus servicios en **********, número **********, colonia **********, sección **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal, que corresponde a las instalaciones de **********; sin embargo, los beneficiarios directos de sus servicios eran ********** y el codemandado físico **********.

En relación con el despido atribuido a los demandados refirió en el hecho cinco que el doce de abril de dos mil once, aproximadamente a las trece horas, su jefe inmediato, el doctor **********, encargado de la coordinación de la línea jurídica de la editorial codemandada y quien ejerce actos de dirección y administración, se comunicó con la actora vía telefónica, para indicarle que por instrucciones del propietario de las empresas demandadas, **********, daba por terminada la relación de trabajo, una vez que concluyera la primera quincena de abril de dos mil once, por lo que tenía que acudir a las oficinas centrales, ubicadas en la calle de **********, número **********, ********** –**********–, colonia **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal, para firmar los documentos correspondientes y para que le hicieran el pago de la quincena respectiva.

En cumplimiento a dicha instrucción, el quince de abril de dos mil once, aproximadamente a las doce horas, acudió a las oficinas centrales de los demandados y se entrevistó con el dueño de la editorial **********, quien le informó que por el momento se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios, confirmándole que ése sería su último día de trabajo y la invitó a que acudiera con el contador de la empresa, para que le hiciera el pago de los salarios y prestaciones adeudadas.

Al contestar la demanda iniciada en su contra, **********, quien reconoció el vínculo laboral con la actora, negó la existencia del despido atribuido y, al controvertir el hecho 5 de la demanda, negó la totalidad los puntos señalados en el mismo.

Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil doce, el apoderado de la parte demandada ofreció como pruebas supervenientes, los pliegos de posiciones de uno de febrero de dos mil doce a cargo de **********, ********** y **********, bajo el argumento de que en las posiciones correspondientes, la demandante afirmó que el despido aconteció en el domicilio ubicado en **********, número **********, colonia **********, sección **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal, siendo que en el hecho cinco de su demanda, refirió que la separación, aconteció en la calle de **********, número **********, colonia **********, delegación **********, en esta ciudad; además de que en los pliegos de posiciones indicó que el despido aconteció el doce de abril del año en curso, esto es, en el año dos mil doce, en que se presentaron los pliegos de posiciones, en tanto que en la demanda se señalan las fechas de doce y quince de abril de dos mil once (fojas 138 a 142 del expediente laboral).

En audiencia de veinte de marzo de dos mil doce, la Junta responsable dio vista a la parte actora por el término de tres días, con las pruebas para hechos supervenientes, ofrecidas por la parte demandada, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera (foja 158 vuelta del expediente laboral).

En audiencia de dieciocho de octubre de dos mil doce, la Junta responsable desechó las pruebas supervenientes ofrecidas por la parte demandada "en virtud de que no es el medio idóneo para acreditar el hecho que pretende, aunado a que no se trata de una prueba superveniente, pues tienen tal carácter, aquellas que fueron conocidas por las partes con posterioridad a la audiencia de ofrecimiento de pruebas o que sobrevinieron después de haberse celebrado la misma, pero en ambos casos deben estar relacionadas con la litis principal, siendo el caso que las pruebas que pretende ofrecer ya obran en el expediente laboral al rubro citado, las cuales en el momento de dictar la resolución se les dará el valor que corresponda, desechamiento que se realiza con fundamento en los artículos 788, 789 y 881 de la Ley Federal del Trabajo, así como en la jurisprudencia publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, tesis III.T. J/5, página 424, cuyo rubro es: 'PRUEBAS DE HECHOS SUPERVENIENTES, DEBEN ESTAR CONDICIONADOS A LOS TÉRMINOS DE LA LITIS.'; así como también la jurisprudencia III.T. J/6, página 430, cuyo rubro es: 'PRUEBAS

SUPERVENIENTES EN LOS CONFLICTOS LABORALES.' …" (foja 169 del expediente laboral). El subrayado es del tribunal.

Lo determinado por la autoridad laboral se estima objetivamente acertado dado que dichas probanzas no son para "hechos supervenientes", esto para sucesos acontecidos con posterioridad a la fecha en que debieron aportarse como prueba o que siendo de fecha anterior, a aquella en que se celebró la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, se conocieron con posterioridad o se fueron confeccionando a través del tiempo, como ocurriría en el caso de una averiguación previa, sino que se refieren a hechos que fueron plasmados en la misma demanda laboral y que son los que constituyen la materia de la controversia y de las pruebas que se ofrecen en el expediente, ya que desde la presentación de la demanda la actora refirió que el despido aconteció el doce de abril de dos mil doce, con efectos a partir del quince siguiente.

En otra porción de sus conceptos de violación, los terceros interesados señalan que en relación con la codemandada **********, quedó demostrada la inexistencia de la relación de trabajo y del despido alegado, ya que en una posición refiere que dicha persona moral le otorgó un salario mensual de $ ********** (**********) y, en otra, afirma que le hacía entrega por cuenta directa de dicha empresa, de la cantidad de $ ********** (**********) quincenales, lo que es totalmente contradictorio; además de que en una posición señala que el despido aconteció en **********, número **********, colonia **********, sección **********, delegación **********, código postal **********, en México, Distrito Federal, lo que es contrario a lo afirmado en el hecho cinco de la demanda, que indica que la separación aconteció en la calle de **********, número **********, colonia **********, delegación **********, Distrito Federal, con lo que queda desvirtuado el despido referido por la demandante.

Los citados argumentos resultan inoperantes, dado que dichas cuestiones quedaron firmes, al declararse infundados los conceptos de violación propuestos por la quejosa **********, que sostenían que con la inspección y el libro de texto ofrecidos como pruebas, se acreditó la relación laboral con la empresa ********** y el codemandado físico **********.

Sobre el tema, este Tribunal Colegiado de Circuito comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en su tesis XVII.1o.C.T.20 K (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 7 de febrero de 2014 a las 11:16 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2171, bajo el título, subtítulo

y texto siguientes: "AMPARO ADHESIVO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE PRETENDEN REFORZAR UNA CONSIDERACIÓN QUE QUEDÓ FIRME ANTE LA FALTA DE IMPUGNACIÓN O POR LA INEFICACIA DE LOS MOTIVOS DE DISENSO QUE EN SU CONTRA SE FORMULARON EN EL JUICIO PRINCIPAL.—De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 182 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo adhesivo puede promoverse por la parte que obtuvo sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, a fin de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio e invocar las violaciones procesales que puedan transgredir sus derechos. Ahora, si en el juicio de amparo principal no se controvierten algunas de las consideraciones del acto reclamado, o bien, se califican de infundados o inoperantes los conceptos de violación en tal sentido, empero, se concede la protección constitucional solicitada por vicios en cuestiones desvinculadas a aquéllas; en el examen del amparo adhesivo deberán calificarse de inoperantes los razonamientos que pretendan reforzar las primeras, puesto que el resultado a favor del adherente constituye una cuestión firme ante la falta de impugnación o ineficacia de los motivos de disenso."

En otro fragmento de sus conceptos de violación, los terceros interesados señalan que la Junta responsable omite analizar las afirmaciones contenidas en los pliegos de posiciones formulados por la parte actora, que adquieren el carácter de confesiones expresas y espontáneas de su parte y que desvirtúan en su totalidad la existencia del despido alegado, debido a que señalan que la actora fue despedida en una fecha y lugar diversos a los que se encuentran plasmados en su demanda laboral, con lo que se desvirtúa el contenido de su escrito inicial de queja, resultando falsos los hechos que sustentan su acción, debido a que en los pliegos de posiciones afirma que el despido ocurrió el doce de abril del año en curso, es decir, del dos mil doce; año en que fue exhibido el pliego de posiciones, por lo que el despido no pudo ocurrir ni el doce, ni el quince de abril de dos mil once, que sostiene en su demanda laboral, ni tampoco en el año de dos mil doce, dado que los pliegos fueron exhibidos en febrero de ese año, por lo que dichas posiciones desvirtúan en su totalidad el hecho cinco de la demanda laboral, sin que la actora pueda alegar en su defensa "errores mecanográficos", dado que al presentarse los pliegos y dársele el uso de la palabra, no realizó corrección o aclaración alguna.

Las citadas alegaciones resultan infundadas, conforme a lo siguiente:

Como quedó precisado en párrafos que anteceden, ********** reclamó de **********, ********** y **********, su indemnización constitucional y

pago de salarios caídos, entre otras prestaciones, al alegar que fue objeto de un despido injustificado.

Como hechos que sustentan su acción, la demandante indicó que ingresó a laborar para los demandados el diecinueve de julio de dos mil siete, con el puesto de **********, con una jornada de las ocho a las diecisiete horas, con una hora diaria para descansar y tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo, de lunes a viernes, con descanso los sábados y domingos y un salario de $ ********** (**********) mensuales que le cubría **********, aunque de manera adicional, ********** le entregaba de manera quincenal, la cantidad de $ ********** (**********), en efectivo, por lo que su salario ordinario quincenal, ascendía a $ ********** (**********), haciéndole firmar las citadas empresas dos nóminas de pago.

Agregó que prestó sus servicios en **********, número **********, colonia **********, sección **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal, que corresponde a las instalaciones de **********; sin embargo, los beneficiarios directos de sus servicios eran ********** y el codemandado físico **********.

En cuanto al despido atribuido a los demandados refirió en el hecho cinco que el doce de abril de dos mil once, aproximadamente a las trece horas, se comunicó con la actora vía telefónica, su jefe inmediato, el doctor **********, encargado de la coordinación de la línea jurídica de la editorial codemandada y quien ejerce actos de dirección y administración, para indicarle que por instrucciones del propietario de las empresas demandadas, **********, daba por terminada la relación de trabajo, una vez que concluyera la primera quincena de abril de dos mil once, por lo que tenía que acudir a las oficinas centrales, ubicadas en la calle de **********, número **********, ********** –**********–, colonia **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal, para firmar los documentos correspondientes y para que le hicieran el pago de la quincena respectiva.

En acatamiento a dicha instrucción, el quince de abril de dos mil once, aproximadamente a las doce horas, acudió a las oficinas centrales de los demandados y se entrevistó con el dueño de la editorial **********, quien le informó que por el momento se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios, confirmándole que ése sería su último día de trabajo y la invitó a que acudiera con el contador de la empresa, para que le hiciera el pago de los salarios y prestaciones adeudadas.

Al contestar la demanda iniciada en su contra, **********, quien reconoció el vínculo laboral con la actora, negó la existencia del despido atribuido y, al controvertir el hecho 5 de la demanda, señaló lo siguiente:

"... Es falso que el día 12 de abril del 2011 a (sic) aproximadamente a las 13:00 hrs. El Dr. **********, se encontrara en las oficinas de **********, se comunicara vía telefónica con la trabajadora, para informarle que acababa de terminar una reunión con el propietario de las empresas, **********, para comunicarle que había recibido la instrucción del dueño de dar por terminada la relación de trabajo con la actora, una vez concluida la quincena y que acudiera el día 15 de abril de 2011, a las oficinas centrales a firmar los documentos correspondientes y para que le hiciera el pago de su quincena, toda vez que lo único cierto es que dichos hechos jamás ocurrieron, por lo que se niega en su totalidad.—Es falso que el día 15 de abril del 2011, aproximadamente a las 12:00 hrs. la actora acudiera a las oficinas centrales de **********, y que se entrevistara con el dueño de la **********, y que éste la recibiera, en el cual le agradecía todo su trabajo y colaboración pero que por el momento se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios, confirmándole que ese día sería su último día de trabajo, y que la invitó a que acudiera con el contador de las empresas del mismo edificio para que le hiciera el pago de sus derechos y de los salarios y prestaciones adeudados, toda vez que lo único cierto de los hechos es que dichas manifestaciones que indica la actora, jamás ocurrieron ni en el lugar que indica, ni en ningún otro, ni mucho menos por la persona que indica, por lo que se niegan dichas manifestaciones, toda vez que jamás ocurrieron. Es falso que la actora posteriormente acudiera con el contador y que le hicieron el pago incompleto de su quincena, pidiéndole que se retirara de la empresa, toda vez que dichos hechos jamás ocurrieron. De lo anterior, se insiste que la actora, jamás ha sido despedida de su trabajo, ya que ni en la fecha y hora que indica o ninguna otra, tampoco en el lugar que indica o ninguno otro, mucho menos por las personas que manifiesta o ninguna otra, ni en los términos y formas que manifiesta o ningunas otras, la actora jamás ha sido despedida de su trabajo. Asimismo, se hace valer la excepción de oscuridad y/o defecto legal de la demanda toda vez que no indica modo, tiempo y lugar, es decir, no indica la hora en que supuestamente ocurrió el despido. Por lo que deja en un estado de indefensión a mi representada. Se manifiesta para todos los efectos legales a que haya lugar, que la actora jamás pudo haber sido despedida de su trabajo el día y hora, ni por las personas que falsamente menciona en su demanda, es decir el día 15 de abril del 2011, en el domicilio que indica, toda vez que con fecha 15 de abril del 2011 el C. **********, se encontraban (sic) en domicilio diverso al que indica la actora y de la cual realizaron diversas actividades, por lo que desde luego jamás pudo haber sido despedida

la actora en el domicilio que indica, tal y como falsamente manifiesta toda vez que mis representadas se encontraba (sic) en un lugar diverso al mencionado por el mismo, tal y como le consta a diversas personas …" (fojas 61 y 62 del expediente laboral).

Para acreditar la procedencia de su acción, la demandante ofreció como pruebas, entre otras, las confesionales a cargo de los demandados **********, ********** y **********, que fueron desahogadas el uno y dos de febrero de dos mil doce.

En el pliego de posiciones fechado el uno de febrero de dos mil doce, se le formuló al demandado **********, entre otras posiciones, las siguientes:

"… 18. Que su representada despidió a la actora el día 12 de abril del año en curso (sic), aproximadamente a las 13:00 horas;

"19. Que cuando sucedió el despido la actora se encontraba en su lugar de trabajo en el domicilio ubicado en **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, México, D.F.;

"24. Que el día 15 de abril de 2011, aproximadamente a las 12:00 hrs., su representada por conducto de **********, manifestó a la actora que se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios confirmándole que ése sería su último día de trabajo…" (fojas 85 y 87 del expediente laboral). El subrayado es del tribunal.

En el pliego de posiciones fechado también el uno de febrero de dos mil doce, se le formuló a la demandada **********, entre otras preguntas, las siguientes:

"… 19. Que su representada despidió a la actora el día 12 de abril del año en curso (sic), aproximadamente a las 13:00 horas;

"20. Que su representada sabe que cuando sucedió el despido, la actora se encontraba en su lugar de trabajo en el domicilio ubicado en **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, México, D.F.;

"24. Que el día 15 de abril de 2011, aproximadamente a las 12:00 hrs., indicó a la actora que se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios confirmándole que ése sería su último día de trabajo…" (fojas 89 y 90 del expediente laboral). El subrayado es del tribunal.

Por su parte, en el pliego de posiciones fechado el dos de febrero de dos mil doce, se le formuló al codemandado físico **********, entre otras preguntas, las siguientes:

"… 19. Que usted despidió a la actora el día 12 de abril del año en curso (sic), aproximadamente a las 13:00 horas, por conducto del Dr. **********;

"20. Que usted sabe que cuando sucedió el despido, la actora se encontraba en su lugar de trabajo en el domicilio ubicado en **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, México, D.F.;

"24. Que el día 15 de abril de 2011, aproximadamente a las 12:00 hrs., usted se entrevistó con la actora y le indicó que se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios confirmándole que ése sería su último día de trabajo …" (fojas 95 y 96 del expediente laboral). El subrayado es del tribunal.

De lo anterior se advierte que, contrario a lo manifestado por los terceros interesados, no se advierten las contradicciones que alegan en sus conceptos de violación y que a su consideración destruyen la procedencia de la acción intentada, ya que desde la presentación de la demanda, la actora ********** fue clara en señalar que el doce de abril de dos mil once, aproximadamente a las trece horas, su jefe inmediato, el doctor **********, quien ejerce actos de dirección y administración, se comunicó vía telefónica con la actora, para indicarle que por instrucciones de la parte patronal se daba por terminada la relación de trabajo, una vez que concluyera la primera quincena de abril de dos mil once, por lo que tenía que acudir a las oficinas centrales, ubicadas en la calle de **********, número **********, ********** –**********–, colonia **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal, para firmar los documentos correspondientes y le hicieran el pago de la quincena respectiva.

Por ello, el quince de abril de dos mil once, aproximadamente a las doce horas, acudió a las oficinas centrales de los demandados y se entrevistó con el dueño de la editorial **********, quien le informó que por el momento se veía en la necesidad de prescindir de sus servicios, confirmándole que ése sería su último día de trabajo y la invitó a que acudiera con el contador de la empresa para que le hiciera el pago de los salarios y prestaciones adeudadas; sin embargo, sólo le hicieron el pago de $ ********** (**********) y le pidieron que se retirara, sin que le hubieran hecho entrega del aviso por escrito a que se refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y, si bien es cierto, en los pliegos de posiciones respectivos se asentó,

de manera incorrecta que el despido aconteció el doce de abril del año en curso (sic), tomando en consideración que si las preguntas se encuentran fechas (sic) el uno y dos de febrero de dos mil doce, es dable concluir que ello obedece a un mero error mecanográfico, si se considera que el doce de abril de dos mil doce, no había transcurrido aún, a las fechas en que se desahogaron tales confesionales (uno y dos de febrero de dos mil doce), por lo que resultaba lógico que no podía referirse a esa data la actora, como fecha del despido alegado, ya que se trataría de un hecho futuro, más aún si se considera que en la posición 24, la actora fue precisa en señalar que el día quince de abril de dos mil once, fue confirmado el despido, por parte de **********, por lo que es dable colegir que no podía hacerse referencia al doce de abril de dos mil doce, sino al doce de abril de dos mil once y sólo se trata de un mero error mecanográfico.

Es de citarse, en lo conducente, la jurisprudencia I.6o.T. J/105, de este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1093, que a la letra dice: "LAUDO. LA CITA INCORRECTA DE ALGÚN DATO DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO (ERRORES MECANOGRÁFICOS EN EL NÚMERO DE EXPEDIENTE O EN EL NOMBRE DE ALGUNO DE LOS CONTENDIENTES) ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERARLO INCONGRUENTE Y, POR ENDE, NO VULNERA GARANTÍAS INDIVIDUALES.—Si la Junta en el laudo citó incorrectamente algún dato de identificación del juicio, como el número de expediente o el nombre de alguno de los contendientes, dicho equívoco no es motivo suficiente para estimar que se está en presencia de un laudo incongruente, si de su lectura se advierte que los demás datos son correctos, que la responsable hace referencia exclusiva a las actuaciones propias del sumario laboral y que no incurre en otras incorrecciones que imposibiliten el conocimiento exacto del juicio; de tal manera que dichos errores pueden ser considerados como mecanográficos y no vulneran garantías individuales, si el estudio realizado por la Junta se llevó a cabo a la luz de lo expuesto por el actor en su demanda, a lo contestado por el demandado y al acervo probatorio aportado por dichas partes, evitándose así caer en rigorismos excesivos."

Sin que exista contradicción respecto del lugar en que aconteció el despido, ya que desde la presentación de la demandada, la actora señaló que cuando dicha separación ocurrió se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado en la calle de **********, número **********, **********, sección **********, delegación **********, C.P. **********, Distrito Federal, es decir, cuando el doce de abril de dos mil doce, su jefe inmediato le indicó que por instrucciones de la patronal, se daba por terminada la relación de trabajo, una vez que concluyera la primera quincena de abril de dos mil once,

por lo que tenía que acudir a las oficinas centrales, ubicadas en la calle de **********, número **********, ********** –**********–, colonia **********, delegación **********, código postal **********, Distrito Federal a firmar los documentos correspondientes y le hicieran el pago de la quincena respectiva.

En consecuencia, al resultar infundados en parte y en otra inoperantes los conceptos de violación propuestos por los quejosos adherentes, lo que procede es negar la protección constitucional en el amparo adhesivo.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 170, 184, 186 y 188 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistente en el laudo de seis de septiembre de dos mil trece, dictado en el expediente laboral **********, seguido por la ahora quejosa en contra de ********** y otros. El amparo se concede para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta ejecutoria.

SEGUNDO.—En el amparo adhesivo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, ********** y **********, contra el acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistente en el laudo de seis de septiembre de dos mil trece, dictado en el expediente laboral **********, seguido por **********, en contra de los quejosos adherentes, en términos del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los Magistrados: presidente, Marco Antonio Bello Sánchez, Carolina Pichardo Blake y Genaro Rivera; siendo relator el último de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la

información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RELACIÓN DE TRABAJO. CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE SU NEGATIVA. Cuando el demandado, como patrón, niega lisa y llanamente la relación de trabajo, corresponde al actor demostrar su existencia, en virtud del principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar sus afirmaciones.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.T. J/22 (10a.)

Amparo directo 3136/94. Armando Bobadilla Pérez y otro. 6 de mayo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretaria: María Eugenia Olascuaga García.

Amparo directo 541/2009. Moisés Fidel Cerón Álvarez. 25 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.

Amparo directo 791/2010. Viridiana Radilla del Valle. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Barrios Flores.

Amparo directo 79/2011. Antonio Hernández Rivera. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Amparo directo 731/2014. 16 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE.

AMPARO DIRECTO 390/2014. 29 DE ENERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS HUGO LUNA RAMOS. SECRETARIA: ROSA DALIA A. SÁNCHEZ MORGAN.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—De esta manera, al actualizarse la vulneración a los derechos fundamentales del quejoso en los términos que enseguida se expon-

drán, resulta innecesario llevar a cabo el estudio de los motivos de disenso que formuló en el escrito de demanda.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, publicada en la página 86, Tomo VI, abril de 1991 del *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época y que a la letra dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.—Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia."

Para motivar el sentido de la presente determinación es necesario transcribir diversos numerales de la Constitución Federal, Ley de Amparo y Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

Constitución Federal (antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho).

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado:

"...

"V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.

"...

"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y, ..."

Ley de Amparo (vigente).

"Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:

"...

"X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley;

"...

"XV. No se cite al imputado para las diligencias que tenga derecho a presenciar o se haga en forma contraria a la ley, siempre que por ello no comparezca, no se le admita en el acto de la diligencia o se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;

"...

"XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo."

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.

"Artículo 135. La ley reconoce como medios de prueba: ... Se admitirá como medio de prueba en los términos del artículo 20, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, incluso aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. ..."

"Artículo 190. Durante la instrucción, el Juez no podrá dejar de examinar a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes. También deberá examinar a los testigos ausentes, en la forma prevenida por este código, sin que esto demore la marcha de la instrucción o impida al Juez darla por terminada cuando haya reunido los elementos necesarios."

"Artículo 191. Toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser examinada como testigo, siempre que pueda aportar algún dato para la averiguación del delito y el Ministerio Público

o el Juez estimen necesario su examen. En estos casos, el funcionario ante quien se realice la diligencia podrá desechar las preguntas que a su juicio o por objeción fundada de parte sean inconducentes; y además podrá interrogar al testigo sobre los puntos que estime convenientes."

"Artículo 200. Si el testigo se hallare fuera del ámbito territorial, se le examinará por exhorto dirigido al Juez de su residencia, o con base en los oficios de colaboración a que se refiere el artículo 119 de la Constitución Federal. Si aquélla se ignorare, se encargará a la Policía Judicial que averigüe el paradero del testigo y lo cite. Si esta investigación no tuviere éxito, el Ministerio Público o el Juez podrán hacer la citación por medio de edicto en el Periódico Oficial."

Cabe puntualizar que el precepto constitucional transcrito sufrió diversas reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho; empero, en el artículo cuarto transitorio se estableció que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 14, 17, 19, 20 y 21 de la propia Carta Magna debían concluirse con las disposiciones vigentes con anterioridad a esa publicación, lo cual se actualiza en el particular, por lo que debe aplicarse lo dispuesto en los numerales citados vigentes en la época en que acontecieron los hechos.

Ahora, para mayor comprensión, es pertinente citar, en lo que interesa, las siguientes constancias:

1. El dieciséis de octubre de dos mil doce, el agente del Ministerio Público consignó las averiguaciones previas **********, ********** y ********** ejerció acción penal contra **********, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado en los artículos 220, primer párrafo, fracción III, 224, párrafo inicial, fracción VIII, y 225, párrafo primero, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, en agravio de ********** (fojas 82 a la 85 de la causa).

2. En esa misma fecha, la Jueza Trigésimo Penal del Distrito Federal recibió la indagatoria, la radicó con el número de causa **********, ratificó de legal la detención al haber ocurrido en flagrancia y el diecisiete de octubre siguiente, recabó la declaración preparatoria a **********; mientras que el diecinueve de ese mismo mes y año, al resolver la situación jurídica, decretó su formal prisión o preventiva por considerarlo probable responsable de la comisión del ilícito de robo agravado (hipótesis de cuando el robo se cometa

respecto de vehículo automotriz, con violencia física y moral); asimismo, ordenó la apertura del procedimiento ordinario (foja 147 de la causa).

3. Por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil doce, la defensa oficial del quejoso ofreció como pruebas, la ampliación de declaración del entonces procesado **********, del denunciante ********** y de los policías preventivos ********** y ********** (foja 156).

4. Mediante proveído también de veintitrés de octubre de dos mil doce, la Jueza natural admitió los mencionados medios probatorios (foja 379).

5. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil doce, la defensa oficial del impetrante objetó el dictamen en materia de valuación emitido por el perito oficial y ofreció como prueba la pericial en la aludida materia, a efecto de que se establezca el valor de mercado del vehículo relacionado, así como los daños ocasionados a dicha unidad (foja 192 del proceso).

6. El trece de noviembre de dos mil doce, la Jueza instructora tuvo por hechas las manifestaciones de la defensa y admitió el enunciado medio de prueba (foja 193).

7. El dieciséis de noviembre siguiente, se desahogaron las declaraciones del denunciante **********, de los policías remitentes ********** y ********** y del encausado ********** (fojas 197 a la 201).

8. El defensor de oficio, por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil doce, ofreció la documental consistente en cuatro cartas de buena conducta y recomendación en favor del entonces procesado, aquí peticionario de amparo (foja 206). La Juez de origen, en la misma fecha señalada en el párrafo que antecede, ordenó agregar a los autos el escrito y anexos relativos, para que surtieran efectos legales (foja 212).

9. La perito adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales presentó el trece de diciembre de dos mil doce, su dictamen en materia de valuación. La Jueza natural, en la misma data, ordenó agregar a los autos dicha opinión técnica para sus efectos legales y ordenó girar oficio a la directora de la Defensoría de Oficio, a efecto de que informara a la experta, que dentro de los tres días contados a partir de su legal notificación, debería comparecer a efecto de ratificar el dictamen emitido, apercibida que en caso de no comparecer sin causa, se le impondría medida de apremio consistente en multa de quince días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. El veintiséis del mes y año en cita, la aludida perito ratificó su dictamen (fojas 218, 219, 220 y 251).

10. El quince de enero de dos mil trece, al advertir discordancia entre lo señalado por el perito oficial en materia de mecánica **********, respecto al valor de mercado del vehículo relacionado, con lo manifestado por la experta en materia de valuación, **********, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; así como la discordancia existente entre lo señalado por el perito oficial en hechos debidos al tránsito de vehículos y en valuación de sus daños, ingeniero **********, respecto de la reparación de daños, con lo señalado por la perito perteneciente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, respecto a la reparación del daño, la Jueza de la causa señaló fecha y hora para llevar a cabo la junta de peritos (foja 252 de los autos de la causa).

11. La aludida junta de peritos se realizó el veinte de enero de dos mil trece, de la cual se desprende que al existir discrepancia entre lo sostenido y dictaminado por los peritos oficiales y la perito de la defensa, la Jueza de la causa ordenó requerir a la Procuraduría General de la República, a efecto de que se designara perito tercero en discordia en materia de avalúo de daños y valor de mercado del vehículo relacionado (fojas 306 y 307).

12. El perito tercero en discordia rindió su dictamen el nueve de abril de dos mil trece (en donde sólo emitió opinión técnica en cuanto al avalúo de daños causados al vehículo relacionado, sin que dictaminara respecto al valor de mercado de esa unidad); el cual, mediante auto de la misma data, la a quo ordenó agregar al sumario y citó al aludido experto para que se presentara al juzgado en el término de tres días contados a partir de su notificación para efecto de la ratificación del dictamen, apercibido de que en caso de no comparecer en la temporalidad señalada se le impondría multa de quince días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (páginas 318 a la 321 del proceso).

13. La supracitada experticial suscrita por el perito tercero en discordia, fue ratificada por su emisor el veinticuatro de abril de dos mil trece, en la misma fecha, la Jueza de origen declaró agotada la instrucción y el treinta del mes y año en cita declaró cerrada dicha etapa procesal.

14. Celebrada la audiencia de vista, el tres de junio de dos mil trece, la Jueza Trigésimo Penal del Distrito Federal, el veinticinco de junio siguiente, dictó sentencia en la que declaró penalmente responsable a ********** por la comisión del delito de robo agravado, en agravio de ********** la que fue modificada por la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, el once de octubre de ese mismo año y que constituye ahora el acto reclamado (fojas 362, 363 y 364 a la 432 de la causa y 19 del toca de apelación).

De lo anterior, se advierte que la Jueza de la causa declaró cerrada la instrucción, aun cuando el perito tercero en discordia emitió su opinión en forma incompleta, pues no determinó el valor de mercado de la unidad vehicular materia del apoderamiento, por lo que debe concederse el amparo solicitado al quejoso para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que revoque el fallo de primer grado y ordene a la Jueza de la causa reponer el procedimiento a fin de que designe perito tercero en discordia para que se pronuncie en cuanto al valor de mercado del vehículo relacionado, toda vez que tanto la valuación de los daños causados como de la unidad precisada, inciden necesariamente en la imposición de las penas y el pago de la reparación del daño; máxime que se advierte que al quejoso se le dictó sentencia definitiva por el delito de robo sancionado en la fracción III del artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal.

Además, se advierte que el proveído donde se declaró cerrada la instrucción se realizó sin transcurrir el término de cinco días a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 314 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, dentro del cual pueden ofrecerse nuevos elementos probatorios, coarta con ello los fines que se persiguen con el auto donde se declara agotada la instrucción; además de que tampoco se realizó la certificación secretarial del cómputo de los plazos establecidos en el artículo 314, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues si al agotar la instrucción el veinticuatro de abril de dos mil trece se fijó el plazo que se precisó feneció el veintinueve del mismo mes y año, debió otorgar el plazo de cinco días y certificar que transcurrió.

Y si bien es cierto, que cuando se declara agotada la instrucción el juzgador puede ampliar el plazo probatorio hasta por cinco días más, lo único que significa es que el plazo que se decide conceder no es fijo sino flexible, pues va de uno hasta cinco días, pero también es cierto que si en el presente caso el juzgador precisó el número de días que otorgaba cuando declaró agotada la instrucción, no atendió al principio de lo más favorable al reo, pues debía estarse al máximo que es de cinco días; sin embargo, no esperó a que transcurriera dicho plazo.

Por tanto, si entre el acuerdo en que se decretó agotada la instrucción y el que declaró su cierre, sólo transcurrieron tres días hábiles (veinticinco, veintiséis y veintinueve de abril de dos mil trece), la Jueza de la causa violó las normas que rigen el procedimiento penal, dejando al quejoso en estado de indefensión, pues sin que hubiera transcurrido el plazo para imponerse de los autos y, en su caso, ofrecer las pruebas que considerara pertinentes, ni existir renuncia expresa, el treinta de abril del año en cita decretó el cierre de la instrucción.

No es óbice a lo anterior, que el agotamiento de instrucción le fue notificado al quejoso y al defensor de oficio, pues esa circunstancia no implica la renuncia al plazo otorgado por la ley, sino que conforme lo dispone el artículo 79 de la ley adjetiva penal, era necesaria su aprobación expresa o que se dejara pasar el término para hacer valer sus derechos, circunstancia que en el caso no aconteció; con lo cual se soslaya que la declaratoria de agotamiento de la instrucción en el procedimiento ordinario, tiene como objetivo dar a conocer a las partes del próximo cierre de la instrucción para que estén en aptitud (si así lo disponen), de hacer el análisis del material probatorio que aportaron al procedimiento y de ser así, se percaten de las diligencias que falten y, en su caso, solicitar su desahogo o bien, manifiesten lo que a su derecho corresponda.

Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia I.6o.P. J/21, emitida por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, publicada en la página 1017, Tomo XXXIV, agosto de 2011 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que a la letra dice:

"INSTRUCCIÓN. SI EL JUEZ DE LA CAUSA, AL DECLARARLA AGOTADA, OMITE PRECISAR EL PLAZO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERIODO PROBATORIO Y DECIDE CERRAR DICHA ETAPA PROCESAL, SIN DEJAR TRANSCURRIR EL PLAZO MÁXIMO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO PENAL QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN.—De conformidad con los artículos 314 y 315 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tratándose de procesos ordinarios, dictada la formal prisión, se ordenará poner el proceso a la vista de las partes para que propongan dentro de quince días las pruebas que estimen pertinentes, las que se desahogarán en los quince días posteriores, pero si del desahogo de las pruebas aparecen nuevos elementos, el Juez podrá señalar otro plazo probatorio de tres días con un desahogo dentro de los cinco días siguientes y, una vez que se considera agotada la instrucción, según las circunstancias que aprecie el juzgador, de conformidad con el párrafo cuarto del citado artículo 314 podrá, de oficio, ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer, o bien, ampliar el plazo de su desahogo hasta por cinco días más. Ahora bien, conforme a este último supuesto, si el Juez declara agotada la instrucción y respecto de dicho plazo flexible que prosigue (que va de uno a cinco días) omite precisar su duración, atendiendo al principio de lo más favorable al reo, debe estarse al máximo de cinco días, por lo que si dicho juzgador declara cerrada esa etapa procesal antes de transcurrido el plazo máximo de referencia se actualiza una violación a las normas que rigen el procedimiento penal que deja sin defensa al quejoso, trascen-

diendo al resultado de la sentencia y, por ende, procede conceder el amparo solicitado para efectos de que se reponga el procedimiento."

A lo anterior, debe agregarse que tanto el agotamiento como el cierre de instrucción tienen una naturaleza jurídica propias; por ende, sus efectos dentro del proceso son distintos y si bien el primero da pauta para la emisión del segundo, la a quo, previo a la declaratoria de cierre de instrucción, debió respetar el plazo del procesado y su defensa para imponerse de la causa con el objeto de revisarla y, en su caso, solicitar el desahogo de aquellas pruebas que falten por llevarse a cabo, o bien, realizar las manifestaciones que estimaran pertinentes; además, tampoco se realizó la certificación secretarial del cómputo de los plazos que establece el diverso 314 de la misma ley procesal.

Por tanto, si en el caso la Jueza de la causa no respetó los plazos establecidos en los artículos 314 y 315 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y declaró cerrada la instrucción, sin que el quejoso o su defensor oficial expresamente consintieran el agotamiento renunciando a los plazos legales para hacer valer sus derechos y sin esperar a que éstos transcurrieran, es inconcuso que incurrió en violación a las formalidades que rigen el procedimiento, cuya infracción afecta la defensa del quejoso y trasciende al resultado del fallo.

Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, publicada en la página 133 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, que dice:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.—La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos,

se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Y la tesis VI.2o.163 P, consultable en la página 754 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, del tenor siguiente:

"INSTRUCCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA AGOTADA DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO.—La resolución que declara agotada la instrucción en la causa penal, no ocasiona un perjuicio de imposible reparación para los efectos del amparo, pues únicamente produce efectos intraprocesales cuyas consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber generado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de desaparecer fácticamente con el hecho de obtener el inconforme una sentencia favorable a sus intereses y en caso contrario, tiene expeditos sus derechos para recurrir dicha resolución y de resultarle adversa, puede promover el amparo directo, en el cual puede alegar como conceptos de violación, tales anomalías."

Por otra parte, este Tribunal Colegiado de Circuito no soslaya que si bien es cierto, conforme a la última reforma realizada al artículo 314 del código procedimental penal para el Distrito Federal, se suprimió un segundo periodo probatorio, lo cierto es, que no autoriza a la Jueza de la causa para emitir un auto como el que nos ocupa, además, si bien existen diversos dispositivos para que la justicia se administre de manera pronta y expedita, con base en lo señalado en el artículo 17 constitucional, también lo es que ese precepto no faculta a la juzgadora a actuar en la forma que lo realizó, en virtud de que no es una prerrogativa para ésta, sino en todo caso del procesado, ya que la pretensión del legislador al instaurar en los juicios ordinarios la declaratoria de agotamiento de instrucción, fue para favorecer el alcance de las derechos fundamentales del procesado, pues la administración en la justicia permite hasta donde sea razonable y posible, la abreviación de procedimientos, mas no prescindir en ningún caso del derecho de defensa.

Es aplicable la tesis publicada en la página 231 del *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, enero-junio 1988, que dice:

"DEFENSA, GARANTÍA DE, TIENE PREFERENCIA SOBRE OTRAS GARANTÍAS DEL REO.—Si bien es cierto que la fracción VIII del artículo 20 constitucional señala que los acusados de algún delito serán juzgados antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no excede de dos años de

prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo; también lo es que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en el plazo que señala la mencionada fracción, es claro que deberán desahogarse las probanzas ofrecidas y admitidas, aun cuando se rebase el término ya señalado, dado que al estar frente a dos garantías consagradas por la Constitución en favor del gobernado, como son las establecidas en las fracciones V y VIII del ya mencionado artículo 20 de la Carta Magna, y debiendo anteponer unas a las otras, lógicamente que deberán prevalecer las que favorezcan más a dicho gobernado, es decir las de audiencia y defensa sobre la de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello de acuerdo con la mencionada fracción VIII del artículo constitucional aludido, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia."

También es aplicable, el criterio sustentado en la tesis VII.2o.P. J/5 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, el cual también comparte este resolutor (con registro digital 186964) consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XV, mayo de 2002, página 971, Novena Época, de rubro y texto:

"DEFENSA, GARANTÍA DE. ES DE MAYOR RANGO AXIOLÓGICO QUE LA DE OBTENCIÓN DE UNA SENTENCIA EN BREVE LAPSO.—Es violatoria de derechos subjetivos públicos la circunstancia de que en la instrucción no se hubiesen desahogado las pruebas ofrecidas por el quejoso, aun cuando estuviese excedido el término que señala el artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, pues aunque esta última es una garantía establecida en beneficio del procesado, no debe perderse de vista que si éste ofrece pruebas para su mejor defensa, la instrucción no puede darse por concluida sin haberse desahogado las probanzas admitidas, por el solo hecho de que se haya rebasado el citado término, ya que entonces se violaría su garantía de defensa establecida en la fracción V del invocado precepto y apartado de la Ley Fundamental, que en la escala de valores de la jerarquía normativa constitucional, es de mayor rango por proteger directamente al gobernado de la acusación formulada en su contra, que aquella que sólo tiende a la obtención de una sentencia en breve plazo."

En consecuencia, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, para el efecto de que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal deje insubsistente la sentencia reclamada emitida el once de octubre de dos mil trece, en el toca penal ********** y dicte otra, en la que revoque la de veinticinco de junio del mismo año, dictada por la Jueza Trigésimo Penal del Distrito Federal, en la causa penal **********, ordene la reposición

del procedimiento, para que la a quo deje sin efectos el auto de treinta de abril de la citada anualidad, en el que decretó el cierre de la instrucción y se desahogue conforme a las normas procesales que la rigen, la prueba pericial a cargo del experto tercero en discordia a efecto de que practique el avalúo del vehículo afecto al proceso, una vez que se cumpla el plazo de cinco días establecido en el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; esto es, decretando el agotamiento de la instrucción y fenecido el plazo precisado continúe con el procedimiento conforme a lo establecido en el artículo 315 del mismo ordenamiento, hasta dictar la sentencia que en derecho proceda y en el supuesto de que se dicte sentencia condenatoria, la misma no deberá agravar las penas ya impuestas al nombrado quejoso.

Para ilustrar a la autoridad responsable la manera en que deberá dar cumplimiento a la presente sentencia, se invoca el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVII/2003, consultable en la página 301, Tomo XVII, mayo de 2003 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, que dice:

"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN FEDERAL IMPLICA DEJAR INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA RECLAMADOS Y DICTAR UNO NUEVO, LA RESPONSABLE DEBE DECIDIR TODAS LAS CUESTIONES LITIGIOSAS EN EL NUEVO LAUDO O SENTENCIA, EVITANDO LA COEXISTENCIA DE DOS O MÁS.—Si se otorga el amparo en contra de un laudo o sentencia definitiva, el cumplimiento de la ejecutoria implica dejar sin efecto la resolución reclamada y dictar otra que dirima todos los puntos de la litis en los términos señalados en la sentencia de garantías; por lo tanto, si la responsable, en el nuevo laudo o sentencia decide únicamente los puntos litigiosos señalados en forma destacada en la ejecutoria de garantías, pero nada resuelve sobre los otros puntos litigiosos ya definidos o intocados por la sentencia de amparo, sino que respecto de ellos deja parcialmente subsistente el laudo o sentencia reclamados, tal proceder, genera la coexistencia de dos resoluciones, lo que impedirá declarar cumplida la ejecutoria, en virtud de que el laudo o sentencia definitiva, como acto jurídico de decisión con que culmina la contestación, no debe emitirse en varios actos, sino en uno solo, que dé unidad a la decisión, tanto más si las resoluciones que constan en diversos actos contienen resolutivos ejecutables, lo cual adquiere mayor relevancia por la obligación de resolver sobre todos los puntos litigiosos en acatamiento del principio de congruencia, así como por la vinculación entre las prestaciones y las pruebas que no deben resolverse ni valorarse de manera separada e incompleta, pues al hacerlo así existiría el riesgo de obtener un resultado diverso al de su valoración conjunta."

No es obstáculo a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 430 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el sentido de que la repo-

sición de procedimiento no se decretará de oficio, en la medida que al efectuar el análisis de control de convencionalidad, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que debe inaplicarse parcialmente tal dispositivo.

En efecto, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, interpretando las normas relativas a esos derechos de conformidad con dichos ordenamientos (principio de interpretación conforme), con lo que se favorece en todo tiempo a las personas con la protección más amplia (principio *pro homine*).

Lo anterior, entre otros, de conformidad con los principios de interdependencia e indivisibilidad, de los cuales se desprende que los derechos humanos se interrelacionan y dependen recíprocamente unos de otros y tienen como origen común la dignidad humana, por lo cual no es procedente relegar algunos para conceder prioridad a otros ni puede existir jerarquía entre ellos, lo que significa que todos los derechos humanos deben ser objeto de protección sin distinción alguna.

En atención a lo anterior y de conformidad con el artículo 103 de la Carta Magna, a las autoridades jurisdiccionales que conozcan del amparo les corresponde con mayor énfasis, en razón de sus funciones de impartición de justicia y atendiendo al objeto del citado juicio, proteger y garantizar los derechos humanos en las controversias sometidas a su competencia; máxime que los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un recurso "efectivo" ante los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que vulneren sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y esos instrumentos normativos.

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", que los Jueces están autorizados para realizar el control de convencionalidad *ex officio*; con independencia de que las partes lo invoquen, pues dicha facultad no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de los accionantes en cada caso concreto.

En observancia de lo anterior, cuando el juzgador de amparo advierta que la norma general, acto u omisión reclamada de la autoridad responsable vulnera los derechos humanos del quejoso, debe abordar el estudio de esa viola-

ción, con independencia de que las partes invoquen o no dicha infracción en sus conceptos de violación o agravios, pues de esa manera se favorece el acatamiento de los principios señalados y se resguarda el efecto útil del juicio de amparo como medio para proteger y garantizar los derechos fundamentales.

Como se indicó, este Tribunal Colegiado de Circuito arriba a la conclusión de que a diferencia de la legislación procesal penal federal, que prevé que si el tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento que haya dejado sin defensa al procesado y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor no fue combatida debidamente, deberá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento (artículo 387[1]); en cambio, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal no contiene expresamente una disposición en ese sentido, por lo que la porción normativa motivo de control convencional consiste en aquella en que se establece que la reposición del procedimiento no se decretará de oficio.

Se considera que el enunciado normativo identificado fue implícitamente aplicado en la sentencia que constituye el acto reclamado en este amparo directo, en virtud de que la Sala responsable, a pesar de que existe una violación procesal que dejó sin defensa al quejoso, no ordenó la reposición del procedimiento.

Ahora bien, confrontado el extracto normativo citado con el texto de los artículos 14 y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que en las disposiciones constitucionales y convencionales citadas se reconocen los derechos humanos de defensa y debido proceso, que son el referente a partir del cual debe llevarse a cabo el control del ajuste de la normatividad nacional a efecto de que se respete el pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos y garantizados tanto por la Constitución como por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

De lo anterior, se obtiene que el artículo 430 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en la porción normativa que establece que la reposición del procedimiento no se decretará de oficio, resulta contraria a las prerrogativas constitucionales de defensa y debido proceso, dado que restringe

[1] Artículo 387. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior si el tribunal de apelación encuentra que hubo violación manifiesta del procedimiento, que haya dejado sin defensa al procesado, y que sólo por torpeza o negligencia de su defensor no fue combatida debidamente, deberá suplir la deficiencia y ordenar que se reponga dicho procedimiento.

sus derechos humanos, pues constituye una limitante a esos derechos fundamentales.

Es aplicable la tesis I.7o.P.15 P (10a.), de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2278 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIX, Tomo 3, abril de 2013, con registro digital 2003386, de rubro y contenido siguientes:

"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO.—El citado precepto, al establecer que la reposición del procedimiento en materia penal no se decretará de oficio, vulnera los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; 8, numeral 2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo anterior, porque a diferencia de la legislación procesal penal federal, el citado artículo 430 no prevé la posibilidad de que el tribunal de apelación ordene reponer el procedimiento para el caso de encontrar alguna violación manifiesta en éste que haya dejado sin defensa al procesado. Por ende, si la condición de validez de toda sentencia penal, radica en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y en el ejercicio pleno del procesado de su derecho a la defensa, al establecer dicha prohibición, el legislador impide que cualquier acto u omisión acaecido durante el procedimiento que cause perjuicios al sentenciado pueda invocarse por la alzada como violación procesal, lo cual transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de defensa y debido proceso."

Criterio de este órgano colegiado que encuentra sustento en lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tópico en análisis, ya que para el Estado Mexicano, dichas sentencias son vinculantes en sus términos cuando se fue parte en el litigio, tal como lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/2011 (9a.), de rubro: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO."; así como los criterios emitidos por aquella instancia internacional, a saber:

"Debido proceso legal. Implica, entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

El artículo 8.1 de la Convención consagra los lineamientos del llamado 'debido proceso legal', que implica, entre otras cosas, el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos."[2]

"Derecho a la defensa. Debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y tratarla como un verdadero sujeto del proceso. La Corte ha establecido anteriormente que el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo."[3]

"Derecho a la defensa. Una de sus garantías es contar con el tiempo y los medios adecuados para prepararla. El tribunal considera que una de las garantías inherentes al derecho de defensa es contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, lo cual obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra."[4]

---

[2] Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 74. Caso Yvon Neptune vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 79. Caso Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 101. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Fondo. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220, párrafo 140.

[3] Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 29. Ver *mutatis mutandis* Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párrafo 71. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párrafo 148. Caso Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 105. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Fondo. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220, párrafo 154.

[4] Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párrafo 170. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párrafo 54. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Fondo. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220, párrafo 156.

"Poder Judicial. Control de convencionalidad. Este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus Jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer *ex officio* un 'control de convencionalidad' entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana."[5]

Ahora, si bien la disposición legal sujeta al mencionado control de convencionalidad no se invocó expresamente como fundamento del fallo reclamado en este juicio de amparo, lo cierto es que de manera implícita rige tal determinación, lo cual es suficiente para efectuar el mencionado control de convencionalidad.

En ese orden, al actualizarse las hipótesis contenidas en el artículo 173, fracciones X, XII y XXII, de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar la protección constitucional al quejoso **********, para el efecto de que la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal deje insubsistente la sentencia reclamada emitida el once de octubre de dos mil trece, en el toca penal ********** y dicte otra, en la que revoque la de veinti-

[5] Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párrafo 219. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párrafo 202. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C No. 220, párrafo 225. *en el asunto de Rosendo Radilla vs. México (que tampoco está incluido "Caso Radilla Pacheco vs. México. Reparaciones. Sentencia 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339") También se asentaron como precedentes: Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párrafo 173. Caso Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párrafo 78.

cinco de junio del mismo año, dictada por la Jueza Trigésimo Penal del Distrito Federal, en la causa penal **********, ordene la reposición del procedimiento, para que la a quo, deje sin efectos el auto de treinta de abril de la citada anualidad, en el que decretó el cierre de la instrucción para que se desahogue conforme a las normas procesales que la rigen, la prueba pericial a cargo del experto tercero en discordia a efecto de que practique el avalúo del vehículo afecto al proceso, una vez que se cumpla el plazo de cinco días establecido en el artículo 314 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, esto es, decretando el agotamiento de la instrucción y fenecido el plazo precisado continúe con el procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 315 del mismo ordenamiento, hasta dictar la sentencia que en derecho proceda; en la inteligencia de que si el fallo es en sentido condenatorio, las penas que imponga no deberán ser superiores a las señaladas en la resolución reclamada.

Es aplicable la jurisprudencia V.2o. J/107 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se comparte, publicada en la página cuarenta y cinco del Número 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, materia común de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, de rubro y texto:

"PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL.—Cuando se concede el amparo por violación a las leyes del procedimiento tendrá por efecto que éste se reponga a partir del punto en que se infringieron esas leyes."

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero, 103 y 107, fracciones II y III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, 73, 74, 75, 79, fracción III, inciso a), 170 y 183 de la Ley de Amparo en vigor, así como 34, 35 y 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra la sentencia definitiva que reclamó de la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, precisada en el resultando primero de este fallo, para los efectos precisados en el considerando último de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos a su lugar de origen y requiérase a la Sala Penal responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, para que informe

sobre el cumplimiento que le dé al presente fallo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la captura de la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Se autoriza al secretario de Acuerdos para suscribir los oficios correspondientes.

Así lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente Jorge Fermín Rivera Quintana, Lilia Mónica López Benítez y Carlos Hugo Luna Ramos (ponente).

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis P. LXVII/2011 (9a.) y P. LXV/2011 (9a.) citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535 y 556, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE. El citado precepto, en la porción normativa que establece: "la reposición del procedimiento no se decretará de oficio", es inconvencional y debe inaplicarse por contrariar los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; 8, numeral 2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que restringe esos derechos humanos. Lo anterior, porque a diferencia de la legislación procesal penal federal, el citado artículo 430 no prevé la posibilidad de que el tribunal de apelación ordene reponer el procedimiento para el caso de encontrar alguna violación manifiesta en éste

que haya dejado sin defensa al procesado. Por ende, si la condición de validez de toda sentencia penal, radica en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y en el ejercicio pleno del procesado de su derecho a la defensa, al establecer dicha prohibición, el legislador impide que cualquier acto u omisión acaecido durante el procedimiento que cause perjuicios al sentenciado pueda invocarse por la alzada como violación procesal, lo cual transgrede en su perjuicio los mencionados derechos fundamentales de defensa y debido proceso.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. I.7o.P. J/2 (10a.)

Amparo directo 488/2012. 31 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Fermín Rivera Quintana. Secretario: Miguel Ángel Aguilar Solís.

Amparo directo 500/2012. 7 de marzo de 2013. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Secretario: Enrique Velázquez Martínez.

Amparo directo 519/2012. 7 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Secretario: Enrique Velázquez Martínez.

Amparo directo 509/2012. 14 de marzo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Fermín Rivera Quintana. Secretario: José Eliseo Reyes Gálvez.

Amparo directo 390/2014. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretaria: Rosa Dalia A. Sánchez Morgan.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO.

AMPARO DIRECTO 884/2014. BEATRIZ CRUZ RODRÍGUEZ. 19 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS RONZON SEVILLA. SECRETARIO: ULISES OCAMPO ÁLVAREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Del expediente contencioso administrativo se advierte que la entonces actora demandó la nulidad de la resolución de veintitrés de agosto

del dos mil trece, dictada en el expediente PF/CFDP/CTSC/267/2012, en el cual el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal la separó del cargo que desempeñaba en esa institución policial, por incumplir el requisito de permanencia, consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

En la sentencia reclamada, la Sala responsable declaró la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada, con la explicación de que está indebidamente motivada, porque la autoridad demandada omitió precisar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para arribar a la conclusión de que la actora incumple con el perfil requerido para permanecer en la Policía Federal y que, por esa razón, deba ser separada de su cargo.

El efecto que la Sala imprimió a la nulidad decretada fue que la autoridad demandada pague a la actora la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional.

En sus conceptos de violación la quejosa argumenta que la responsable no acató el principio de exhaustividad de las sentencias, en contravención al artículo 17 constitucional, ya que aun cuando declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada, omitió resolver las seis pretensiones más que se deducen de su demanda.

Los puntos que a decir de la quejosa fueron omitidos dicen (folios 25 y 26 del expediente del juicio de anulación):

"2. Con motivo de la citada declaratoria de nulidad, ordenar la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, en las bases de datos del Consejo Federal de Desarrollo Policial, en todos los registros y bases de datos que se hayan afectado, así como en el expediente de servicios, para el efecto de que no queden consignados en los mismos como causa de separación: el incumplimiento del requisito de permanencia, consistente en aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.

"3. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 146 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, se solicita sea decretado el pago de la indemnización correspondiente de tres meses de salario, así como de veinte días de salario por cada uno de

los años de servicio prestados, precisando que mi permanencia en la institución fue del dieciséis de julio de dos mil nueve al quince de febrero de dos mil catorce.

"4. Asimismo, y por ser procedente conforme a derecho, como consecuencia resarcitoria de la anulación por ilegalidad del acto administrativo impugnado, se solicita decretar el pago correspondiente a la percepción ordinaria diaria integrada durante el plazo transcurrido desde que se concretó la ilegal separación y hasta que se dé cumplimiento, realizando el pago correspondiente, a la resolución que se dicte en el presente juicio.

"5. De igual manera, y por ser procedente conforme a derecho, como consecuencia resarcitoria de la anulación por ilegalidad del acto administrativo impugnado, se solicita ordenar el pago correspondiente por concepto de aguinaldo, tanto de lo adeudado en el año dos mil catorce, como de la parte proporcional que corresponda hasta que se dé cumplimiento, realizando el pago correspondiente, a la resolución que se dicte en el presente juicio.

"6. Además, y por ser procedente conforme a derecho, como consecuencia resarcitoria de la anulación por ilegalidad del acto administrativo impugnado, se solicita ordenar el pago correspondiente por concepto vacaciones y prima vacacional, tanto del primer semestre del año dos mil catorce, como en las partes proporcionales que correspondan hasta que se dé cumplimiento, realizando el pago correspondiente, a la resolución que se dicte en el presente juicio.

"7. Finalmente, y por ser procedente conforme a derecho, como consecuencia resarcitoria de la anulación por ilegalidad del acto administrativo impugnado, se solicita ordenar el pago correspondiente a las prestaciones o remuneraciones extraordinarias que procedieran por los conceptos de beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro que percibía desde que se concretó la ilegal separación y hasta que se realice el pago correspondiente.

"Es menester precisar que las peticiones identificadas con los números 3, 4, 5, 6 y 7 se reclaman tomando en consideración, de ser el caso, los incrementos salariales que se pudieran generar."

Lo antes transcrito demuestra que la actora, en el entendido de que no podría obtener la reinstalación en el cargo que desempeñaba, solicitó que, además de declarar la nulidad de la resolución de separación, se ordenara a

la demandada eliminar el registro de la sanción y pagar una indemnización (consistente en el monto de tres meses de salario y veinte días más por cada año de servicios prestados), así como las demás prestaciones a que tenga derecho (específicamente, las percepciones que dejó de devengar desde que fue suspendida, incluyendo el aguinaldo, los apoyos vacacionales y demás estímulos o recompensas que le eran pagados).

Sin embargo, la responsable no efectuó un pronunciamiento específico respecto de cada uno de los aspectos señalados, puesto que genéricamente indicó que se deberá atender al contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, en los términos en que lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Precisado lo anterior, y para dar solución a lo que propone la demandante, es necesario tomar en cuenta que el deber a cargo de los órganos jurisdiccionales de analizar la totalidad de los planteamientos expuestos por los justiciables se vincula con la garantía de justicia completa que regula el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme al principio previamente referido, es forzoso que ninguna petición o argumento quede sin solución, de modo que la controversia sea resuelta en su integridad, a menos que el estudio de algún alegato resulte innecesario por advertirse que no generaría mayores beneficios para el solicitante.

No obstante, ese deber no implica que los tribunales, necesariamente, estén constreñidos a abordar cada razonamiento de los promoventes punto por punto, o bien, en el orden en que lo hayan propuesto en sus escritos, pues basta que ningún tema quede sin solución; de ahí que, incluso, el artículo 50, párrafo tercero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo autoriza a las Salas a efectuar un examen conjunto de los razonamientos de las partes.

Sobre el tema descrito resulta ilustrativa la tesis 1a. CVIII/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, que establece:

"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.—El derecho fundamental contenido en

el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional –como las de prontitud y expeditez– y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente."

En relación con lo hasta aquí explicado, destaca que la Sala condenó a la demandada al pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la actora.

Respecto del primer concepto, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal que establece:

"Artículo 146. Los integrantes podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que esta ley señala para permanecer en la institución, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación o la remoción, en términos de lo previsto por el artículo 22 de la ley.

"Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la institución sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones señaladas en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o reinstalación.

"La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en:

"I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, si la relación de servicio fuere por tiempo indeterminado, y

"II. El importe de tres meses de salario base."

Conforme al ordenamiento que rige la actuación que deben seguir las autoridades de la Policía Federal en casos como el que nos ocupa, esto es, que se declare la nulidad de la resolución de separación de un elemento, la indemnización comprende el pago de veinte días de salario por cada año de servicios prestados, así como tres meses más.

Es decir, se encuentran previstos los rubros que la quejosa solicitó en el tercer punto petitorio, antes transcrito.

Por cuanto hace a las "demás prestaciones" que se deben cubrir a la promovente, en la resolución de aclaración de sentencia, la responsable precisó que es en términos de la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:

"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.—El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado 'y demás prestaciones a que tenga derecho'; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una 'indemnización' y 'demás prestaciones a que tenga derecho'. Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo 'y demás prestaciones a que tenga

derecho' forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado."

Como se advierte del criterio reproducido, dentro de la obligación de pago a cargo de las autoridades de seguridad pública quedan incluidos los conceptos indicados por la enjuiciante en los puntos petitorios 4, 5, 6 y 7, toda vez que se trata de "la remuneración diaria ordinaria, así como de los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente".

Los hechos referidos ponen de manifiesto que si bien la juzgadora no hizo referencia expresa a los rubros que la actora pretendía obtener, los términos en que fue redactada la sentencia no dejan lugar a dudas en el sentido de que para el pago de las "demás prestaciones a que tenga derecho", la enjuiciada está constreñida a incluir las cantidades correspondientes a los conceptos enumerados en el escrito de demanda.

Respecto de la indemnización, la responsable tampoco especificó de qué manera se deberá integrar el cálculo respectivo.

Empero, esto último se justifica si se considera que únicamente fue materia de debate si la resolución de separación se emitió debidamente, esto es, si esa sanción fue justificada, lo que, a su vez, conlleva la determinación de la existencia del derecho por parte de la actora a obtener la restitución pecuniaria establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aun cuando la autoridad no cuestionó que ante una eventual decisión desfavorable para sus intereses, el cumplimiento del fallo tendría que efectuarse conforme al marco normativo aplicable, sus actuaciones están limitadas por el principio de legalidad.

Es decir, no resulta indispensable que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le haga saber que tendrá que ajustarse a tales reglas, en virtud de que está constreñida a observarlas por mandato expreso de la Constitución.

Por ende, es indudable que, en el cumplimiento, la autoridad deberá apegarse al marco jurídico aplicable, sin que constituya causa de ilegalidad el hecho de que la Sala no se lo ordene expresamente, ya que, se reitera, únicamente serían necesarias mayores aclaraciones si la determinación conlleva que deba actuar de modo distinto al que se desprende de la literalidad de los ordenamientos de la materia.

En síntesis, la responsable no tendría que indicar a la enjuiciada que el cumplimiento de la sentencia deberá llevarse a cabo en forma legal, por un lado, por su obviedad y, por otro, en razón de que ese tema nunca fue debatido.

Además, el elemento ofrecido por la actora para acreditar sus percepciones habituales –recibo de pago que obra a folio 45 del expediente del juicio natural– no contiene la totalidad de las solicitadas en su escrito inicial, sino únicamente: 1) sueldo compactado, 2) compensación garantizada, 3) compensación por jerarquía, 4) ayuda de despensa y 5) subsidio e impuesto del SSI.

De ahí que la juzgadora no estaba en aptitud de detallar específicamente qué cantidades deberán ser entregadas a la promovente y, en consecuencia, la declaración genérica efectuada en la sentencia deja a salvo sus derechos para que no quede excluido algún monto que resulte procedente.

Una vez definido que los términos del acto reclamado no agravian a la enjuiciante en cuanto a los rubros que pretende obtener, corresponde examinar lo relativo a la petición elevada bajo el punto 2, consistente en cancelar la inscripción de su sanción en la totalidad de registros y bases de datos de la institución policiaca.

Ese tema, tal como sostiene la quejosa, no fue abordado tácita ni expresamente en el fallo reclamado; además, no existe alguna disposición que necesariamente vincule a la tercera interesada a satisfacer las pretensiones de la justiciable.

Por consiguiente, procede que este tribunal resuelva el aspecto indicado, para evitar la prolongación del conflicto con apoyo en el artículo 182, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Cabe mencionar que la quejosa sostiene que tiene derecho a la supresión del mencionado registro puesto que, de otro modo, se otorga publicidad a un antecedente que se demostró ilegal, lo que afecta su honor y reputación.

Añade que tales aspectos inciden en la percepción de sí misma y en la que las demás personas asuman, toda vez que la subsistencia de dichos antecedentes puede propiciar que se le atribuya falta de honradez y calidad ética y, específicamente, la ausencia de confiabilidad laboral, afectación que puede trascender a sus seres cercanos.

Detallada la base sobre la que partirá el estudio, a continuación se debe enfatizar que el régimen excepcional creado para los miembros de las corporaciones de seguridad pública, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integró al orden jurídico nacional la prohibición absoluta de reincorporarlos, aun cuando algún órgano jurisdiccional determine que la separación fue ilegal, y con independencia de la razón que motivó el cese.

Mediante esa restricción se pretendió privilegiar la depuración de los integrantes de dichas instituciones, en favor de quienes la autoridad considere idóneos, con la finalidad de beneficiar la seguridad y el combate a la corrupción.

Refuerza la afirmación anterior la jurisprudencia 2a./J. 103/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, julio de 2010, página 310, cuyos rubro y texto son:

"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE.—Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere

que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio."

Partiendo de lo anterior, se debe recordar que la quejosa solicita la supresión del registro de su separación y de los motivos que la ocasionaron, de las bases de datos de la Policía Federal, como es el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública.

Para analizar esa institución es necesario establecer el marco legal que la rige. En concreto, cobran relevancia los artículos 5, fracciones X y XIII, 60, 74 y 85, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que disponen:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

"…

"X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

"…

"XIII. Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública; …"

"Artículo 60. En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al

otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente."

"Artículo 74. Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación señalen para permanecer en las instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización.

"Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse.

"Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

"Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la indemnización que, en su caso, deba cubrirse."

"Artículo 85. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

"I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas; …"

Los dispositivos transcritos prescriben que deberán quedar inscritas en un registro nacional, tanto la separación de un miembro de la corporación de seguridad pública como, en su caso, la anulación de la resolución respectiva.

También ordenan que en toda institución policial (entendida como tal cualquier institución gubernamental del orden federal, local o municipal) exista la obligación de consultar, en el registro referido, los antecedentes de quienes pretendan ingresar.

Los datos expuestos revelan que las bases de datos, como la que conforma el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, son parte de los instrumentos creados por el legislador federal para cumplir los objetivos que se pretendieron alcanzar mediante el establecimiento de las condiciones particularmente excepcionales a las que sean sujetos los miembros de las corporaciones policiales.

A través de ese mecanismo se busca evitar que quienes sean separados de una institución de esa naturaleza puedan reingresar a alguna similar, en cualquiera de los órdenes de gobierno.

En consecuencia, la eliminación del registro que demuestra que un particular fue removido como elemento de procuración de justicia haría factible que la misma persona solicitara y, eventualmente consiguiera, su reingreso a esas corporaciones, lo que haría nugatorio el objetivo de tales bases de datos y, aún más, implicaría autorizar el desacato al mandato constitucional que, como ya se dijo, contiene una prohibición absoluta.

Esto último se destaca en razón de que el deber de los tribunales de velar por la observancia de la Carta Magna también implica procurar la aplicación de las normas secundarias que hacen posible no quebrantar ese orden normativo.

Sintetizando lo hasta aquí detallado, ya se explicó que el régimen excepcional de los miembros de las instituciones policiales está compuesto como un sistema, con diversas restricciones que impactan en distintos derechos, como el de restitución integral por efecto de las sentencias.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que esas restricciones de rango constitucional deben prevalecer a pesar de cualquier otra disposición en contrario, lo que implica que si únicamente es viable conceder, a quienes demuestren la ilegalidad de su remoción, una "indemnización" y las "demás prestaciones" a que tengan derecho, los tribunales exclusivamente pueden interpretar o detallar qué puede quedar comprendido dentro de tales conceptos.

Esto es, los beneficios a los que puede acceder el afectado se encuentran extremadamente restringidos, motivo por el cual, acceder a la pretensión del solicitante equivaldría a considerar que la cancelación de los registros de la sanción es un efecto viable de la sentencia que declaró injustificada su separación y, por ende, que esa medida se ajusta a la noción de "indemnización" o de las "demás prestaciones a que tenga derecho", lo que por su natu-

raleza es inaceptable, sobre todo si se toma en cuenta que ambas ideas ya fueron definidas por el Alto Tribunal y se reducen a prestaciones de índole pecuniaria.

En conclusión, lo que pretende la justiciable está fuera del alcance tanto de este órgano judicial como de la Sala responsable.

Sin perjuicio de lo previamente definido, se estima indispensable abordar, en forma destacada, el tema relativo al efecto nocivo que moral y psicológicamente puede tener el hecho de que quede asentada en forma permanente la sanción que nos ocupa.

Este tribunal considera que se debe tener como hecho notorio que la existencia de un registro en el que se haga constar que una persona fue separada de su cargo por no acreditar una evaluación de control de confianza, necesariamente incide en bienes jurídicos relevantes como el honor y la buena fama.

Con mayor razón, si la decisión de mérito fue declarada nula de manera absoluta y, aun así, subsiste la inscripción correspondiente.

Aun cuando esa situación no debe pasar inadvertida, ya quedó demostrado que el registro de tales antecedentes constituye un elemento importante para el funcionamiento del régimen excepcional previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución.

Entonces, si bien los alcances del derecho contenido en el artículo 17 de dicho ordenamiento obligan a que los medios de defensa existentes permitan restituir a los gobernados en el goce de sus derechos transgredidos (ya sea que incidan sólo en el plano legal, o bien, en el personal), la existencia de regímenes excepcionales como el que impera respecto de los elementos de las corporaciones de seguridad pública restringe el margen de actuación de los órganos jurisdiccionales, de suerte que quedan constreñidos a procurar lo más aproximado posible una restitución integral, pero sin vulnerar el orden constitucional.

No obstante, lo anterior no implica que el menoscabo de índole moral que ocasionan las resoluciones como la que fue declarada nula deba quedar incólume, como se explicará a continuación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en diversos casos, que las sentencias constituyen, por sí, una forma de reparación

adicional a las distintas medidas que en la propia resolución se ordenen en beneficio de la parte favorecida.

La afirmación que antecede se demuestra a través de la siguiente reproducción de la jurisprudencia internacional:

"Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.

"Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de veintitrés de noviembre de dos mil nueve.

"…

"XI. Reparaciones.

"…

"374. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia puede constituir *per se* una forma de reparación. No obstante, considerando las circunstancias del caso sub júdice, los sufrimientos que las violaciones cometidas causaron a las víctimas, así como el cambio en las condiciones de vida y las restantes consecuencias de orden inmaterial o no pecuniario que estos últimos sufrieron, la Corte estima pertinente fijar una cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños inmateriales.

"…

"XII. Puntos resolutivos.

"La Corte … dispone, por unanimidad, que,

"7. Esta sentencia constituye *per se* una forma de reparación. …"

El criterio del referido tribunal internacional implica el reconocimiento de que las sentencias no solamente exponen el sentido en que debe culminar una contienda, pues si bien su efecto inmediato ciertamente es dar solución a la controversia, en materias como la que compete a la Corte Interamericana, también constituyen una declaración jurisdiccional sobre la regularidad de la actividad del Estado.

Esto último también es aplicable a los juicios en materia administrativa, ya que guardan coincidencia con aquellos en el sentido de que el juzgador

debe analizar si las determinaciones adoptadas por algún órgano de gobierno vulneraron los derechos de un particular.

Lo que se ve robustecido por el hecho de que ese tipo de resoluciones, al causar estado, se convierten en la verdad legal, de modo que su contenido no puede ser invalidado por alguna autoridad, ya que así se preserva la seguridad jurídica de los individuos, como lo reconoce la jurisprudencia P./J. 85/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589, que dice:

"COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales."

Ante las circunstancias descritas, queda en evidencia que la sentencia que declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada no se limita, para efectos morales, a indicar a la actora el resultado del juicio anulatorio y detallar la situación jurídica que deberá prevalecer.

Ciertamente, en relación con la afectación psicológica y social que resintió la justiciable, el fallo constituye un verdadero reconocimiento, firme e inmutable, de que la remoción de su cargo fue ilegal, mientras que el registro de esa decisión sólo es susceptible de entenderse como un aspecto meramente histórico que se conserva por razones instrumentales, y que de ningún modo acredita ni determina la veracidad de las supuestas anomalías que dieron lugar a la separación del ex elemento policiaco.

Ése es, por consiguiente, el valor adicional que procede otorgar a la decisión de la Sala responsable.

En otro concepto de violación, la promovente aduce que la juzgadora tenía el deber, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad de las normas, de ordenar que su indemnización sea cuantificada conforme a su salario integrado y no al de base, en razón de que el artículo 146, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal que establece la limitación, es inconstitucional; argumento que apoya en los precedentes de este Tribunal Colegiado.

Para dar el tratamiento que corresponde al alegato en estudio, conviene precisar que ese precepto no formó parte del pronunciamiento de la Sala, puesto que, como se aclaró en párrafos anteriores, no especificó detalladamente los términos en que deba ser cumplida la resolución anulatoria.

Empero, partiendo de que el reclamo de la inconforme parte de la base de que se debió efectuar un control *ex officio*, procede determinar si le asiste razón en el sentido de que la norma indicada vulnera sus derechos constitucionales, en atención, además, a que la fijación oportuna de los efectos del fallo evitará la prolongación innecesaria del procedimiento de ejecución e, incluso, la eventual promoción de un nuevo medio de defensa, lo cual vulneraría la garantía de justicia pronta.

De igual modo, tomando en cuenta que la Sala aceptó que el pago de la indemnización se efectúe conforme a los parámetros constitucionales y legales vigentes, se debe entender que realizó una aplicación implícita del artículo cuya regularidad se cuestiona y, por tanto, es atendible la solicitud de control *ex officio*.

Para mayor claridad, conviene reproducir nuevamente el contenido del artículo de mérito:

"Artículo 146. Los integrantes podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos que esta ley señala para permanecer en la institu-

ción, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación o la remoción, en términos de lo previsto por el artículo 22 de la ley.

"Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la institución sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones señaladas en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o reinstalación.

"La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en:

"...

"II. El importe de tres meses de salario base."

Atendiendo al precepto reglamentario en mención, el sueldo que debe considerarse para fijar el monto de la indemnización es el salario base que, conforme a lo que ha definido la Suprema Corte, es el identificado con los importes consignados en los tabuladores regionales para cada puesto, sin considerar los demás conceptos que hubiera percibido en forma regular y continua.

Para resolver si resulta válido fijar el monto que le corresponde a la quejosa por concepto de indemnización equivalente a tres meses de salario conforme al sueldo base, es necesario realizar un análisis previo del dispositivo reglamentario en que la autoridad administrativa debe basar su cálculo:

Ya quedó establecido que la quejosa formó parte de un cuerpo de seguridad pública y, al haber sido declarada injustificada su remoción, tiene derecho a una indemnización y a las demás prestaciones que debió percibir conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, debe informarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1051/2011, determinó que como dicho precepto constitucional no precisa cuál es el monto de la indemnización a la que hace referencia, para resolver ese aspecto es necesario adoptar un parámetro que esté contenido en la propia Norma Fundamental, puesto que se trata de una prerrogativa susceptible de equipararse a las del ámbito de los derechos sociales; de ahí que no pueda ser detallada en un ordenamiento de menor jerarquía.

Añadió que, por ende, resulta aplicable el artículo 123, apartado A, fracción XXII, que dispone que dicho resarcimiento equivale al pago de tres meses de salario, sobre la base de que regula casos esencialmente análogos, ya que, tratándose de los trabajadores, el patrón tiene la opción de no reinstalarlos y, en el caso de los servidores públicos de los organismos de seguridad, existe la prohibición de hacerlo.

Las consideraciones relatadas dieron origen a la tesis 2a. LXIX/2011, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 531, que dispone:

"SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.—El indicado precepto establece el derecho de los miembros de instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, al pago de una indemnización por parte del Estado, cuando la autoridad jurisdiccional resuelva que fue injustificada su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, pero no precisa su monto. En tal virtud, para hacer efectivo ese derecho constitucional debe aplicarse una norma del mismo rango, debido a que la inclusión de la indemnización como garantía mínima para ese tipo de servidores públicos, aun cuando derive de una relación administrativa, está prevista en el ámbito de los derechos sociales y en el rango más alto del sistema jurídico. De esta forma, como la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Constitución prevé el derecho a la indemnización por el importe de 3 meses de salario cuando un trabajador es separado injustificadamente de su empleo, es inconcuso que en ambos supuestos –remoción de un miembro de alguna institución policial y despido injustificado de un trabajador–, existe la misma razón jurídica para definir la indemnización respectiva. Por tanto, ante la falta de norma que señale el monto de la prevista en la fracción XIII del apartado B, debe hacerse una aplicación analógica de la fracción XXII del apartado A, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se haga efectivo el derecho constitucional a la indemnización que la Ley Fundamental otorga a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales que sean separados injustificadamente de su cargo; es decir, por ese concepto (indemnización) debe cubrirse el pago de 3 meses de su remuneración."

Lo resuelto por el Alto Tribunal permite extraer, como conclusión relevante, que el derecho a la indemnización y el hecho de que deba consistir en tres meses de salario están previstos en la Constitución.

Atendiendo al caso, cobra relevancia la existencia del artículo 146, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal que desarrolla el concepto antes mencionado y precisa que el pago correspondiente se debe efectuar sobre el salario base, como se puede corroborar de su contenido, el cual fue transcrito en los párrafos que preceden.

De dicha disposición se advierte que el legislador federal no fue quien definió el concepto de indemnización y lo relativo a su cuantía, sino que esa labor fue realizada por el presidente de la República en ejercicio de su facultad reglamentaria.

No obstante, como lo precisó la Suprema Corte, la excepcionalidad del régimen establecido por la Constitución para los integrantes de las corporaciones de seguridad pública, así como la magnitud de las restricciones que implica, obliga a que el desarrollo de sus bases mínimas esté contenido en la propia Norma Fundamental.

De lo anterior se sigue que es el artículo 123, apartado A, fracción XXII, el que debe ser interpretado para deducir el alcance de la prerrogativa de que se trata. El texto de dicho precepto es:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad,

cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. …"

De lo transcrito se advierte que la Carta Magna no distingue entre si el pago que a manera de resarcimiento por la no restitución del empleo se entrega a quien fue separado, debe calcularse sobre tres meses de salario integrado o de salario base, y tampoco la ley, por lo que la precisión de los alcances de la indemnización constitucional fue llevada a cabo directamente por el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Esto último se destaca, puesto que bajo el principio de supremacía de dicho instrumento jurídico-político, el legislador ordinario no puede ir más allá de lo que prevén las normas constitucionales, y mucho menos puede hacerlo el encargado de ejecutar las leyes.

Si en el concepto constitucional de indemnización no se efectuó distinción alguna sobre los conceptos integrantes del salario para el efecto de su cuantificación, no es viable llevar a cabo ese ejercicio en una disposición distinta, conforme al principio que reza: donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir.

En esas condiciones, es viable concluir que la limitación de que se determine la cantidad respectiva tomando como parámetro el salario básico y no la integración de todos los emolumentos que percibía ordinariamente el ex funcionario, excede lo dispuesto por el Ordenamiento Supremo.

Es verdad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone que la indemnización por no reinstalación de un empleado deba calcularse atendiendo al salario integrado de quien fue privado de su empleo, por lo que no puede afirmarse que el Reglamento de la Ley de la Policía Federal transgreda el texto expreso de aquel dispositivo.

Sin embargo, la intelección literal de la Constitución no es la forma idónea para resolver el tema relativo a qué debe entenderse por salario para efectos de la indemnización, sino que, atendiendo al principio *pro personae* establecido en el artículo 1o. de dicha normativa, se estima que debe atenderse a los fines de la regla de que se trata.

También, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 888/2011, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil once, ya realizó una interpretación de los conceptos que deben integrar la indemnización, prescindiendo de las

disposiciones laborales, y detalló la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, entendiéndose por éstas el deber de pagar la remuneración ordinaria, así como los demás conceptos que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago correspondiente.

Al resolver el mencionado amparo directo en revisión, la Segunda Sala sostuvo, en lo que interesa, las siguientes consideraciones:

"Por definición, resarcir significa indemnizar, reparar, compensar un daño, perjuicio o agravio (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, tomo II, página 1779).

"Entonces, como el Poder Reformador de la Constitución Federal previó que el Estado podía incurrir en responsabilidad administrativa, ante la imposibilidad constitucional de reincorporar a los miembros de instituciones policiales, cuando la autoridad jurisdiccional resuelva injustificado el acto o resolución que determinó la separación, remoción, baja o cese, estableció la obligación de resarcir tanto el daño originado por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución, como los perjuicios que se traducen en el impedimento de obtener la contraprestación a que tendría derecho si no hubiese sido separado.

"No queda duda de que la indemnización prevista en la norma constitucional que se analiza tiene como finalidad cubrir el daño provocado por el acto del Estado declarado injustificado; en tanto que la obligación de pagar 'las demás prestaciones a que tenga derecho' el servidor público, como supuesto normativo, busca satisfacer los perjuicios ocasionados por ese acto, y que se encuentra cargado del mismo sentido jurídico previsto por el Poder Reformador, compensar o reparar las consecuencias de ese acto del Estado. …"

Atendiendo al criterio del Alto Tribunal, se deduce que la indemnización prevista en la norma constitucional, en los casos en los que se declare ilegal el cese de un miembro de los cuerpos de seguridad pública, tiene por objeto cubrir el daño provocado por el acto del Estado declarado injustificado y, en consecuencia, el salario a considerar para determinar el monto de la indemnización por ese motivo debe ser el efectivamente percibido por el servidor público, incluyendo todos los conceptos que lo integran, a fin de lograr el resarcimiento de forma integral del derecho del que se vio privado, como compensación del perjuicio sufrido con motivo del cese injustificado, lo cual es acorde con lo establecido por la fracción XXII del apartado A del artículo

123 de la Carta Magna, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que es aplicable de forma analógica para definir el monto de la indemnización en mención.

Además, sería incongruente sostener que, para cubrir el otro de los dos elementos que conforman la indemnización respectiva, consistente en el pago de los tres meses de salario, deba atenderse sólo al salario base sin incluir los demás conceptos que percibió de forma regular y continua, en virtud de que la propia Suprema Corte ha establecido que el pago de las "demás prestaciones a que tenga derecho", como parte integrante de la obligación resarcitoria del Estado, debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público.

Por tanto, si para el pago de las "demás prestaciones a que tenga derecho" se atiende al monto integral que percibió el servidor público como salario, resulta conforme a la Constitución que en esos términos se cubra el otro de los dos elementos que integran la indemnización, consistente en el pago de los tres meses de salario; es decir, atendiendo al salario percibido, incluyendo la totalidad de conceptos que recibió de forma regular y continua.

En efecto, si la intención que subyace en el precepto que establece el pago de tres meses de remuneración es compensar al empleado, ante la negativa –o imposibilidad– del patrón para restituirlo en sus funciones, es claro que no existe un motivo válido para estimar que se debe partir del sueldo base y no de la suma de los emolumentos que se le entregaban de forma regular, periódica y continua con motivo de su encargo.

Esto se corrobora considerando que la revisión de salarios base, por regla general, tiene como finalidad establecer un monto homogéneo para la determinación de las cuotas obrero patronales, para las personas de un mismo puesto y nivel, aspecto que en nada se relaciona con el de la destitución ilegal de un funcionario en lo individual.

Involucrar ese concepto en este tipo de asuntos sólo podría tener como justificación minimizar el monto del pago que será otorgado a la persona separada de su cargo, lo que desde luego es jurídicamente inaceptable, si se toma en cuenta que la principal causa generadora de la obligación a cargo del empleador es un despido injustificado, por lo que no podría entenderse que la responsabilidad derivada de esa irregularidad se establezca en términos favorables para quien la cometió y desfavorables para quien la resintió.

En síntesis, si de la interpretación del artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución –aplicable por analogía a este tipo de asuntos, como ya se explicó– se advierte que no distingue entre si la indemnización corresponde a tres meses de sueldo base o integrado y, por el contrario, debe entenderse que se refiere a este último, es indebida la restricción efectuada en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal.

Las razones expuestas no son las únicas por las cuales se adopta esta conclusión. También es indispensable destacar que tratándose de los efectos de las sentencias de control de la constitucionalidad favorables a un gobernado, la regla general es que ordenen una restitución integral. En el caso, ese concepto se traduciría en la reinstalación de la quejosa en el empleo del que fue indebidamente separada.

No obstante, como ya fue materia de exposición en este fallo, al ser reformado el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, se creó un régimen de excepción tratándose de los miembros de seguridad pública, quienes no tienen derecho a la restitución en su encargo, en ningún caso, sin importar cuál haya sido la causa de su separación.

La validez de ese trato diferenciado estriba en que su sustento se encuentra en la propia Carta Magna, de conformidad con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al artículo 1o., primer párrafo, última parte, de dicho ordenamiento, por la cual determinó que ésa es la única manera de establecer restricciones válidas a los derechos humanos previamente reconocidos por el Estado.

Dicho criterio quedó reflejado en la jurisprudencia P./J. 20/2014, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202:

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.—El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del

citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano."

También apoya la afirmación que precede, el contenido de la tesis 2a. XXVIII/2014, de la Segunda Sala de dicho órgano judicial, consultable en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 1083, que establece:

"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL.—La prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no da lugar a que sea posible emprender un ejercicio de armonización o de ponderación entre derechos humanos, pues al ser una restricción constitucional es una condición infranqueable que no pierde su vigencia ni aplicación, la cual constituye una manifestación clara del Constituyente Permanente, que no es susceptible de revisión constitucional, pues se trata de una decisión soberana del Estado Mexicano."

Si el Alto Tribunal ha reconocido que la prohibición de reinstalar al miembro de una institución policial, aun cuando demuestre que fue separado en forma ilegal, equivale a una disminución en el alcance de un derecho humano, que es el de la restitución integral como efecto de una sentencia favorable, no cabe más que concluir que esa restricción no puede ser agravada mediante un ordenamiento distinto a la propia Norma Fundamental.

En otras palabras, por el gran impacto que tiene la situación inusual en que instaló el Reformador de la Constitución a ese tipo de funcionarios públicos, en el disfrute de los derechos de los que ordinariamente goza otro servidor público, es necesario que la compensación que se estableció ante ese hecho sea lo más amplia posible, sin exceder, desde luego, el contenido de las normas expresas de la propia Carta Magna, ni desconocer el régimen de excepción que fue creado.

Los razonamientos que anteceden ponen de manifiesto que el artículo 146, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, al acotar el monto de la indemnización a que tiene derecho la quejosa, es inconstitucional.

Similar criterio sostuvo este órgano colegiado al resolver los recursos de revisión RA-97/2014 y RA-153/2014, así como la queja QA-45/2014, esta última de la que derivaron las tesis aisladas I.1o.A.2 CS (10a.) y I.1o.A.74 A (10a.), publicadas en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, páginas 1791 y 1821, que establecen, respectivamente:

"POLICÍA FEDERAL. EL ARTÍCULO 146, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENEN DERECHO LOS INTEGRANTES DE ESE CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN CASO DE SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO, ES INCONSTITUCIONAL.—Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si una persona es removida de su puesto en una corporación de seguridad pública, y esa decisión es declarada injustificada, tiene derecho a una indemnización y a las demás prestaciones que debió percibir; y si bien dicho precepto constitucional no precisa cuál es el monto que se debe pagar por ese concepto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIX/2011, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 531, de rubro: 'SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.', sostuvo que, para resolver ese aspecto, es necesario adoptar un parámetro que esté contenido en la propia Norma Fundamental, por lo que resulta aplicable el artículo 123, apartado A, fracción XXII, constitucional, que dispone que dicho resarcimiento equivale al pago de tres meses de salario. Ahora bien, el artículo 146, párrafo tercero,

fracción II, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal establece que el cálculo respectivo debe ser efectuado a partir del sueldo base, por lo que constituye una limitante en su cuantía; luego, aun cuando el último precepto constitucional mencionado no indica que la indemnización por la no reinstalación de un empleado deba calcularse atendiendo al salario integrado de quien fue privado de su empleo, y no puede afirmarse que el reglamento mencionado transgreda su texto expreso, la intelección literal de la Constitución Federal no es la forma idónea para resolver el tema relativo a qué debe entenderse por salario para efectos de la indemnización; por el contrario, en atención al principio *pro personae*, es necesario interpretarla en el sentido de que, si la intención que subyace en el precepto que establece el pago de tres meses de remuneración es compensar al empleado, ante la negativa –o imposibilidad– del patrón para restituirlo en sus funciones, no existe un motivo válido para estimar que se debe partir del sueldo básico y no de la suma de los emolumentos que se le entregaban regular, periódica y continuamente con motivo de su encargo, máxime que para el pago de las 'demás prestaciones a que tenga derecho' se atiende al monto integral que percibía el servidor público. Consecuentemente, el citado artículo 146, párrafo tercero, fracción II, al limitar el monto de la indemnización a que tienen derecho los integrantes de ese cuerpo de seguridad pública, en caso de separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio es inconstitucional, pues cualquier restricción al derecho de restitución integral, como efecto de las sentencias favorables a un particular, no puede estar contenida en un ordenamiento distinto a la propia Norma Fundamental."

"SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO.—Aun cuando dicho precepto constitucional no precisa cómo debe cuantificarse la indemnización a que se refiere, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que resulta aplicable, por regular supuestos análogos, el artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la propia Constitución, puesto que la excepcionalidad del régimen establecido por el legislador constitucional para los integrantes de las corporaciones de seguridad pública, así como la magnitud de las restricciones que implica, obligan a que el desarrollo de sus bases mínimas esté contenido en la propia Norma Fundamental. Luego, si en el segundo precepto no se efectuó distinción alguna sobre los conceptos integrantes del salario, para el efecto de la cuantificación del monto resarcitorio, no es viable llevar a cabo ese ejercicio, conforme al principio que establece que donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir. De lo anterior resulta que la indemnización

a que tienen derecho los miembros de las corporaciones de seguridad pública, cuya remoción se declare injustificada, equivale a tres meses de salario integrado, tomando en cuenta, además, que la prohibición de reinstalar al servidor público, aun cuando demuestre que fue separado en forma ilegal, constituye una restricción excepcional a sus derechos que no debe ser agravada sino que, por el contrario, es necesario que la compensación sea lo más amplia posible, sin exceder, desde luego, el contenido de las normas expresas de la propia Carta Magna ni desconocer el régimen de excepción que fue creado. Tal conclusión se corrobora considerando que la propia Suprema Corte ha establecido que el pago de las 'demás prestaciones a que tenga derecho' incluye la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público, por lo que resultaría incongruente sostener que, para cubrir los tres meses de salario, no se deban incluir todos los rubros que obtuvo de forma regular y continua."

Al quedar evidenciada la inconstitucionalidad del precepto cuestionado, no cabe más que concluir que asiste razón a la enjuiciante con relación a que procede que la responsable determine su inaplicación en ejercicio del control *ex officio* de su regularidad, al tenor de la Norma Fundamental.

El ejercicio de esa facultad se justifica considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que ese tipo de control, si bien en principio deriva de la obligación de los Jueces del Estado Mexicano de dar preponderancia a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, también es susceptible de efectuarse en relación con las prerrogativas fundamentales que tutela la Constitución.

Sirve de apoyo la tesis P. LXIX/2011 (9a.), sustentada por el Alto Tribunal funcionando en Pleno, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552, que establece:

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.—La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación

conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país –al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano–, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."

Resulta ilustrativa la tesis aislada 1a. LXVIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 639, que establece:

"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO*. NO ES UNA CUESTIÓN DE SUBSIDIARIEDAD, POR LO QUE DEBE LLEVARSE A CABO AUN CUANDO EL DERECHO HUMANO DE QUE SE TRATE ESTÉ CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—La obligación de ejercer el control *ex officio* de constitucionalidad y convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos casos en los que el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución Federal. Lo anterior, porque el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control *ex officio* fuera una cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los Jueces y todas las autoridades del país estaban obligadas a velar por los derechos humanos y que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria de derechos en el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá además llevar a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica el expediente Varios 912/2010: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto y, en su caso, inaplicación."

Por tanto, como ya se explicó, la disposición reglamentaria de que se trata implica un menoscabo al derecho de indemnización del que gozan los miembros de los cuerpos de seguridad pública, al hacer una distinción que no prevé la Constitución en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, ni en la fracción XXII del apartado A.

El control de su regularidad debe ser *ex officio,* porque se transgreden directamente los principios de supremacía constitucional y subordinación jerárquica, así como el derecho de acceso completo a la justicia, en su modalidad de restitución debida de derechos como efecto de las sentencias, que si bien en este caso no puede ser integral, sí debe ser lo menos restringida posible.

De ahí que el pago de la compensación motivo de este análisis deberá ser calculado atendiendo a tres meses del sueldo integral de la quejosa, y no a los emolumentos básicos, como dispone el reglamento que procede desaplicar.

Atento a lo expuesto, al resultar parcialmente fundados los conceptos de violación en estudio, se debe conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, cuyo efecto inmediato y directo es la ineficacia jurídica de la sentencia reclamada; por ende, la Sala deberá pronunciar otra en donde reitere los aspectos que no fueron materia de controversia y, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria, ordene que el cálculo de la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución se realice atendiendo a tres meses del sueldo integral de la actora.

Cabe aclarar que la promovente solicitó que este tribunal supla la deficiencia de sus planteamientos.

El otorgamiento de ese beneficio procesal es improcedente, ya que la desestimación parcial de los conceptos de violación no derivó de que fueran planteados en forma incompleta o incorrecta, sino de que, por un lado, no se le ocasionó el agravio que adujo y, por otro, acceder a su solicitud implicaría infringir el orden constitucional, de ahí que no existe deficiencia alguna qué suplir.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a Beatriz Cruz Rodríguez, contra la sentencia dictada el once de julio del dos mil catorce por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad 7732/14-17-09-12.

Notifíquese personalmente; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Julio Humberto Hernández Fonseca (presidente), Joel Carranco Zúñiga y Carlos Ronzon Sevilla, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el último de los nombrados.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO. Aun cuando dicho precepto constitucional no precisa cómo debe cuantificarse la indemnización a que se refiere, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que resulta aplicable, por regular supuestos análogos, el artículo 123, apartado A, fracción XXII, de la propia Constitución, puesto que la excepcionalidad del régimen establecido por el legislador constitucional para los integrantes de las corporaciones de seguridad pública, así como la magnitud de las restricciones que implica, obligan a que el desarrollo de sus bases mínimas esté contenido en la propia Norma Fundamental. Luego, si en el segundo precepto no se efectuó distinción alguna sobre los conceptos integrantes del salario, para el efecto de la cuantificación del monto resarcitorio, no es viable llevar a cabo ese ejercicio, conforme al principio que establece que donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir. De lo anterior resulta que la indemnización a que tienen derecho los miembros de las corporaciones de seguridad pública, cuya remoción se declare injustificada, equivale a tres meses de salario integrado, tomando en cuenta, además, que la prohibición de reinstalar al servidor público, aun cuando demuestre que fue separado en forma ilegal, constituye una restricción excepcional a sus derechos que no debe ser agravada sino que, por el contrario, es necesario que la compensación sea lo más amplia posible, sin exceder, desde luego, el contenido de las normas expresas de la propia Carta Magna ni desconocer el régimen de excepción que fue creado. Tal conclusión se corrobora considerando que la propia Suprema Corte ha establecido que el pago de las "demás prestaciones a que tenga derecho" incluye la remuneración diaria ordinaria, los beneficios,

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público, por lo que resultaría incongruente sostener que, para cubrir los tres meses de salario, no se deban incluir todos los rubros que obtuvo de forma regular y continua.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A. J/6 (10a.)

Queja 45/2014. Víctor Magdaleno Ruiz. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.

Amparo en revisión 97/2014. Titular de la División de Fuerzas Federales y Coordinador de Servicios Generales, ambos de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Álvaro García Rubio.

Amparo en revisión 153/2014. Arturo Vilchis Alarcón. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.

Amparo directo 840/2014. Francisco Javier Corrigeux Rodríguez. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.

Amparo directo 884/2014. Beatriz Cruz Rodríguez. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Ulises Ocampo Álvarez.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a. LXIX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 531.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL.

AMPARO DIRECTO 1254/2014. 12 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ. SECRETARIA: MARGARITA CORNEJO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—El análisis de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente:

Esgrime la quejosa, en esencia, en su primer concepto de violación, que la responsable sin fundamento ni motivación la condena al reconocimiento de antigüedad desde el ********** y hasta el **********; ya que las pruebas tomadas en cuenta allegadas por el actor, fueron exhibidas en copias simples susceptibles de alteración, aunado a que no ofreció medio de perfeccionamiento, por lo que estima carecen de valor; de ahí que refiera que con sus probanzas y en específico con el formato único de movimientos del personal federal de fecha **********, se acredita el inicio de la relación laboral.

Son infundados los anteriores argumentos, por los siguientes motivos:

Del escrito inicial de demanda, bajo el numeral 3), la actora reclamó el reconocimiento de su antigüedad general desde el ********** y la que se siga generando durante el tiempo que dure el juicio.

En la contestación a la demanda, la **********, negó acción y derecho a la actora, pues dijo que era falso que hubiere laborado desde la fecha mencionada, sino que fue a partir del **********, cuando inició la relación de trabajo.

En el acto reclamado la responsable, en lo conducente, determinó lo siguiente: "… el reconocimiento de antigüedad a partir de la fecha en que comenzó la trabajadora a prestar sus servicios a la dependencia, del ********** al ********** y la que se siga generando durante todo el tiempo que dure el presente; la entrega del comprobante de las aportaciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante la relación de trabajo, desde el ********** al ********** y las que se generen durante la tramitación del presente juicio, el pago de todos y cada uno de los conceptos que por derechos de seguridad social que tiene todo trabajador desde el inicio de la relación laboral, el ********** al ********** y los que correspondan con motivo de la continuación de la relación de trabajo, lo siguiente: '… se hace valer la excepción de prescripción derivada del artículo 112 de la ley de la materia y en el supuesto no consentido que se señalará que le corresponden tales reclamos, únicamente podrán ser objeto de análisis dentro del presente juicio, por lo que respecta un año hacia atrás a partir de la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el **********, por tanto, del ********** hacia atrás debe operar la prescripción de su reclamo.'.—Respecto de la excepción de prescripción, opuesta en contra de la prestación 3), debe declararse

improcedente, en virtud de que el reconocimiento de antigüedad es una prestación de tracto sucesivo, es decir, que se genera con el paso del tiempo y, por ende, no prescribe. … 3), consistente en el reconocimiento de antigüedad general del tiempo de servicios prestados a la dependencia, correspondiente … a partir del ********** al ********** y la que se siga generando durante todo el tiempo que dure el presente juicio, se condena a los titulares codemandados, a reconocerle la antigüedad a la accionante a partir del ********** al **********, (fecha de terminación de la relación laboral con el carácter de confianza), toda vez que de las probanzas ofrecidas por la parte actora se advierte el oficio número **********, de fecha ********** (foja 35), mediante el cual se le comunicó su adscripción a partir del **********, constancia de retenciones y percepciones, expedida a favor de la accionante, por el periodo de ********** al ********** (foja 36), constancias a nombre de la actora, expedidas con motivo de curso y tutoriales en que participó la accionante (fojas 37 a 40) y comprobantes de percepciones y deducciones (fojas 41 a 59), que abarcan los años 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, en virtud de lo anterior, la accionante demostró haber comenzado a prestar sus servicios a favor de los titulares codemandados, a partir de la fecha que señala en la prestación que nos ocupa, y no en la señalada por los demandados, al existir continuidad en las constancias que obran en autos."

Determinación que resulta objetivamente correcta, en principio porque de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que, cuando el trabajador demanda el reconocimiento de derechos de esa naturaleza, a fin de recibir los beneficios que en su caso otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que se hayan generado por el transcurso del tiempo laborado, corresponde al patrón omiso reconocer ante ese instituto, la antigüedad laboral que generó el trabajador por ser una consecuencia de la acción de reconocimiento de la relación laboral; de ahí que sea inextinguible el derecho a reclamarla, ya que es obligación de los titulares de las dependencias cubrir las aportaciones en términos del artículo 7 de la ley que rige al referido instituto.

Resulta aplicable el criterio emitido por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis número I.6o.T.437 L,[1] cuyos rubro y texto son:

---

[1] Novena Época, Registro digital: 164682, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXI, abril de 2010, materia(s): laboral, página 2808.

"SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL.—El artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que, cuando el trabajador demanda el reconocimiento de derechos de esa naturaleza, por ejemplo, que se le reconozca la correspondiente cotización ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por todo el tiempo que duró el vínculo laboral con la dependencia a la que prestó sus servicios, corresponde al patrón omiso reconocer ante ese instituto, la antigüedad laboral que generó el trabajador por ser una consecuencia de la acción de reconocimiento de la relación laboral; de ahí que sea inextinguible el derecho a reclamarla, ya que es obligación de los titulares de las dependencias, en términos del artículo 7 de la ley que rige al referido instituto, cubrir las aportaciones que en este rubro disponen las leyes, con el objeto de que sus trabajadores reciban los beneficios a que tengan derecho y que hayan generado por el transcurso del tiempo laborado."

Ahora, en términos del artículo 784, fracción I, en relación con el 801 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, corresponde al patrón demostrar, entre otros aspectos, la fecha de ingreso del trabajador.

De las pruebas allegadas al juicio por la **********, destaca el Formato Único de Movimientos del Personal Federal de **********, lo cierto es que la fecha que se desprende del aludido documento, no corresponde a aquella en la que afirma la demandada ingresó la actora a la prestación del servicio.

Por otro lado, la accionante allegó al juicio diversas documentales que, contrario a lo argumentado en los conceptos de violación, no son copias fotostáticas, sino originales, según se aprecia a fojas 35 a 60 de los autos, consistentes en el numeral 7. Recibos de pago, controles de asistencia, comprobantes de pago de vacaciones y aguinaldo y el numeral 8. Consistente en diversas constancias anexas; mismas que fueron objetadas por la demandada, ahora quejosa, en cuanto a su alcance y valor probatorio, según consta a fojas 97 y 98 de los autos.

De las que destacan el oficio número **********, de la Administración Local de Auditoría Fiscal del Oriente del D.F. dirigido a la actora, donde se le comunica asignación, fechado el **********; constancia de percepciones y retenciones para efectos del impuesto sobre la renta, fechado en **********; diversas constancias de cursos de asistencia y participación expedidas en favor de la actora por la Administración Local de Auditoría Fiscal del Oriente

del D.F. de fechas ********** al **********, del ********** al **********, del ********** al ********** y del ********** al **********; todos del año **********; así como diversos recibos de pago de diversas datas, correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, 2001, 2003; y, 2004; documentales que en su conjunto desvirtúan la fecha indicada por la demandada en su escrito de contestación, así como la que se refiere en el formato único de movimientos del personal federal al que alude; y, por tanto, resulta correcta la condena impuesta al reconocimiento de la antigüedad de la actora en la data fijada por la responsable; lo que hace infundados sus argumentos a estudio.

Resulta aplicable la jurisprudencia número 1086,[2] emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:

"ANTIGÜEDAD GENÉRICA. EN SU CÓMPUTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PENSIONES PREVISTAS EN LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA, DEBE ACUMULARSE EL TIEMPO TOTAL QUE EL EMPLEADO PRESTÓ SUS SERVICIOS DERIVADOS DE UN MISMO VÍNCULO LABORAL, AUNQUE LO HUBIERA HECHO EN PERIODOS DISCONTINUOS.—La antigüedad genérica es la creada de manera acumulativa mientras la relación contractual esté vigente, respecto de la cual el derecho a su reconocimiento no se extingue por falta de ejercicio, en tanto subsista la relación laboral, ya que se actualiza cada día que transcurre, y la adquieren los trabajadores desde el primer día de labores, no obstante sus interrupciones en el servicio, pues así deriva del artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo, al establecer ese derecho a favor de los trabajadores temporales mencionados en el ordinal 156 de esa ley. En estas condiciones, se concluye que para el cómputo de la antigüedad genérica o de empresa deben tomarse en cuenta los diferentes periodos que la integran, aunque sean discontinuos, para distintos efectos, entre ellos, el pago de las pensiones previstas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, lo anterior en virtud de un mismo vínculo laboral, entendiendo como tal el proveniente de las distintas dependencias públicas que pertenecen al gobierno de la entidad, es decir, la antigüedad que debe acumularse para tales efectos es la derivada del trabajo prestado a esas dependencias, no así a entidades diversas pertenecientes al orden federal o a la iniciativa privada, en razón de que pertenecen a un marco normativo diverso en cuanto a las relaciones laborales, a las normas de seguridad social y a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir sus conflictos de trabajo. Además, el derecho a la acumulación de la antigüedad

[2] Novena Época, Registro digital: 1009881, *Apéndice* 1917-Septiembre 2011, Tomo VI. Laboral, Primera Parte-SCJN, Segunda Sección, relaciones laborales burocráticas Subsección 2-Adjetivo, materia(s): laboral, página 1072.

derivada de un mismo vínculo laboral durante los periodos discontinuos es el reconocimiento al desgaste natural generado en los años efectivamente laborados y, como tal, no puede dejarse a decisión de la parte patronal, pues el derecho lo adquiere el trabajador por virtud del tiempo total de trabajo productivo que le dieron el derecho a garantizar tanto su subsistencia como la de su familia. Sostener lo contrario daría incluso opción a que, al advertir que algún trabajador computa determinada antigüedad, el patrón lo dé de baja aunque sea por un breve término, para después reintegrarlo a su trabajo, pues con ello eludiría sus obligaciones y desconocería los derechos generados por sus trabajadores a lo largo del tiempo."

En su segundo concepto de violación, esgrime la quejosa que en términos de los artículos 15 y 16 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado son los propios trabajadores quienes deberán cubrir las cuotas de seguridad social; por lo que estima que resulta excesiva la decisión de la Sala en condenar a la ahora quejosa a reconocer el derecho de seguridad social de la accionante.

Continúa diciendo que si la autoridad responsable determinó procedente el reconocimiento retroactivo ante el instituto de seguridad social, estima que debió determinar de igual manera que la accionante debe realizar las aportaciones respectivas en la parte y porcentajes que le correspondan, conforme a los artículos 15 y 16 de la ley del aludido instituto; y, por tanto, exhibir las aportaciones respectivas que deben enterarse, pues la única obligación de la demandada, es retener los descuentos correspondientes al salario.

Son infundados los anteriores argumentos, por los siguientes motivos:

En el acto reclamado, la responsable estableció lo siguiente: "derivado del reconocimiento de antigüedad de la parte actora (********** al **********), aspecto que fue analizado en líneas precedentes; condenó a la ********** y al **********, a la entrega de la constancia correspondiente de las aportaciones al instituto de seguridad social, por el aludido periodo".

Determinación que resulta objetivamente correcta, toda vez que conforme al artículo 123, fracción XIV, constitucional, los trabajadores de confianza al servicio del Estado (calidad que logró justificar la demandada y que fue motivo de estudio en el amparo relacionado número DT. ********** [**********]; visto en sesión de esta misma fecha promovido por **********); si bien no gozan de estabilidad en el empleo, lo cierto es que sí de las prerrogativas del salario, así como de las prestaciones de seguridad social.

Por tanto, derivado del reconocimiento de antigüedad, corresponde a la entidad federal, esto es, la ********** y al titular del **********, en su calidad de patrón, enterar las cuotas correspondientes de seguridad social al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto del derecho de la actora y, por tanto, de entregarle la constancia respectiva, como una consecuencia directa e inmediata del reconocimiento de antigüedad, sin que pueda inferirse que se vulnera el principio de retroactividad, pues no debe soslayarse el hecho de que el patrón se encuentra obligado por mandato constitucional a dar de alta a sus trabajadores desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, así como a retener y enterar las cuotas correspondientes.

De ahí que, si en el caso, la patronal no lo hizo con la oportunidad debida, corresponde a ésta asumir las consecuencias de ello, es decir, desde el ingreso de la trabajadora a su servicio; pues se trata de un derecho que los trabajadores gocen de la seguridad social y, por ende, desde propio inicio de la prestación de servicios; de ahí que resulta objetivamente correcto que la responsable condenara a la entrega de la constancia respectiva; lo que hace infundados los argumentos a estudio.

En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación a estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 183, 184, 186 y 189 de la Ley de Amparo vigente y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la **********, contra el acto de la Quinta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de cinco de junio de dos mil catorce, dictado en el expediente laboral **********, seguido por **********, en contra del quejoso y otro.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución a la autoridad responsable; vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, integrado por los Magistrados: presidente Genaro Rivera, Carolina Pichardo Blake y Marco Antonio Bello Sánchez, siendo relator el último de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL. El artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la garantía de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, por lo que, cuando el trabajador demanda el reconocimiento de derechos de esa naturaleza, por ejemplo, que se le reconozca la correspondiente cotización ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por todo el tiempo que duró el vínculo laboral con la dependencia a la que prestó sus servicios, corresponde al patrón omiso reconocer ante ese instituto, la antigüedad laboral que generó el trabajador por ser una consecuencia de la acción de reconocimiento de la relación laboral; de ahí que sea inextinguible el derecho a reclamarla, ya que es obligación de los titulares de las dependencias, en términos del artículo 7 de la ley que rige al referido instituto, cubrir las aportaciones que en este rubro disponen las leyes, con el objeto de que sus trabajadores reciban los beneficios a que tengan derecho y que hayan generado por el transcurso del tiempo laborado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.T. J/21 (10a.)

Amparo directo 1367/2009. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.

Amparo directo 901/2013. Delegación Iztapalapa. 3 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Cruz Montiel Torres.

Amparo directo 652/2014. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.

Amparo directo 1185/2014. Secretaría de Educación Pública. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Teresa de Jesús Castillo Estrada.

Amparo directo 1254/2014. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES.

AMPARO EN REVISIÓN 2/2015. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. 12 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS ALCARAZ OROZCO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Por razón de técnica jurídica, en primer término se analizará el agravio que hace valer la recurrente, referente a la causa de improcedencia que fue desestimada por el a quo.

La inconforme argumenta que el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del Año 2014 es una norma heteroaplicativa, ya que con su sola vigencia no crea, transforma o extingue situaciones jurídicas concretas de derecho, por lo que no causa perjuicio al quejoso, al no haber acreditado el primer acto de aplicación y, en consecuencia, el juicio de amparo es improcedente.

El Juez Federal, al abordar esa causa de improcedencia la declaró infundada, sobre la base de que los numerales 7.3.2., 7.3.7. y 7.4.1. del programa reclamado tienen la naturaleza de normas autoaplicativas.

Cabe precisar que si bien la autoridad no especifica cuál norma del programa de verificación es la que tiene el carácter de heteroaplicativa, de la lectura integral del agravio se aprecia que se refiere al numeral 7.4.1., lo cual guarda congruencia con el fallo impugnado, ya que dicho precepto fue materia de la concesión de amparo.

En esos términos, el problema jurídico a resolver estriba en determinar la naturaleza jurídica de la disposición 7.4.1. del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del Año 2014.

Para tal efecto, es necesario atender al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."

Conforme a dicho criterio, las disposiciones autoaplicativas o de individualización incondicionada son las que, atendiendo al imperativo en ellas contenido, vinculan al particular a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sin que se requiera de alguna condición para su actualización.

Por otra parte, son normas heteroaplicativas o de individualización condicionada las que contienen obligaciones de hacer o de no hacer, que no surgen en forma automática con su sola expedición, sino que se requiere de un determinado acto que condiciona su aplicación.

En el caso, las disposiciones 7.4. y 7.4.1., inciso a), del programa reclamado, establecen:

"7.4. Constancia de verificación tipo cero '0' (holograma '0'). Podrán obtener este tipo de holograma:

"7.4.1. Los vehículos a gasolina cuyos niveles de emisión no sobrepasen 100 partes por millón (ppm) de hidrocarburos, 0.6% en volumen de monóxido de carbono, 1000 ppm de óxidos de nitrógeno y 0.6% en volumen de oxígeno, con un lambda no mayor a 1.05, en tanto que el resultado de la suma del monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen y que, además, cumplan con el siguiente requerimiento respecto a su modelo:

"a) Vehículos de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina año modelo 2006 y posteriores."

De los preceptos transcritos se desprenden los requisitos que deben reunir los vehículos que consumen gasolina para poder obtener la constancia de verificación vehicular denominada "holograma cero".

Entre esos requerimientos destaca que, al momento de realizar la prueba correspondiente en los verificentros, los automotores deben obtener emisiones de contaminantes que no sobrepasen 100 partes por millón (ppm) de hidrocarburos; 0.6% en volumen de monóxido de carbono; 1000 ppm de óxidos de nitrógeno, y 0.6% en volumen de oxígeno, con un lambda no mayor a 1.05, en tanto que el resultado de la suma de monóxido de carbono y bióxido de carbono no deberá salirse del intervalo de 13 a 16.5% en volumen.

Asimismo, como requisito adicional para acceder al holograma cero, se establece la obligación de acreditar que el vehículo de uso particular, de carga y transporte colectivo de pasajeros a gasolina sea modelo dos mil seis o posterior.

De lo anterior se aprecia que, conforme al programa impugnado, los propietarios de un vehículo modelo dos mil cinco o anterior no pueden acceder a la obtención del holograma tipo cero y, en consecuencia, no pueden circular todos los días, aun cuando las emisiones de contaminantes de su automóvil se encuentren dentro de los parámetros prescritos en la norma sujeta a estudio.

Esa restricción vincula a los particulares que se encuentran en la hipótesis del numeral impugnado desde el momento en que entró en vigor, en virtud de que genera perjuicio a los propietarios de automotores modelo dos mil cinco o anteriores, al no poder acceder al holograma cero, sin que se requiera de algún acto posterior para el acatamiento de dicha disposición.

Por consiguiente, atendiendo al contenido material de la disposición administrativa analizada, es evidente que es de naturaleza autoaplicativa, dado que con su sola entrada en vigor causa perjuicio a sus destinatarios, en tanto que prevé una limitante a los propietarios de vehículos dos mil cinco y anteriores para obtener un holograma cero y circular todos los días.

Es decir, la restricción derivada de la norma nace con ella misma, sin que se requiera de la actualización de alguna condición, o que se realice determinado acto para que el gobernado esté obligado a acatarla.

Por tanto, es infundado el agravio de la recurrente, puesto que, como acertadamente lo resolvió el Juez Federal, no se actualiza la causa de improcedencia analizada, toda vez que la norma administrativa estudiada no requiere de un acto posterior para su aplicación en perjuicio de los sujetos a los que va dirigida la restricción ahí prevista, sino que, desde su entrada en vigor, impide a los propietarios de vehículos modelo dos mil cinco o anterior obtener el holograma cero.

Resulta ilustrativa al caso, la tesis I.1o.A.89 A (10a.) de este órgano judicial, publicada el viernes 30 de enero de 2015 a las 09:20 horas, en el *Semanario Judicial de la Federación*, con registro digital: 2008366, que establece:

"VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.—Conforme al mencionado precepto del programa publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de junio de dos mil catorce, los propietarios de un vehículo modelo dos mil cinco o anterior no pueden aspirar a la obtención del holograma tipo cero y, en consecuencia, no pueden circular todos los días, aun cuando las emisiones de contaminantes de su automotor se encuentren dentro de los parámetros prescritos en la propia norma. Atendiendo al contenido material de esa disposición administrativa, se concluye que es de naturaleza autoaplicativa, toda vez que dicha restricción no requiere de un acto posterior para su aplicación en perjuicio de los sujetos a los que va dirigida, sino que, desde su entrada en vigor, impide a los propietarios de vehículos modelos dos mil cinco o anteriores la posibilidad de obtener el holograma cero."

Sin que resulte aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 196/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALCOHOLÍMETRO. LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA, RESPECTIVAMENTE, LOS ARTÍCULOS 100 Y 102 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO, Y EL AVISO DEL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE INGESTIÓN DE ALCOHOL EN CONDUCTORES DE VEHÍCULOS, AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003, NO SON RECLAMABLES EN AMPARO POR SU SOLA ENTRADA EN VIGOR.", con la que pretende la inconforme acreditar la actualización de la causa de improcedencia alegada, en virtud de que dicho criterio se refiere a un caso diverso al que se analiza, consistente en el programa de control y prevención de ingestión de alcohol en conductores de vehículos.

Además, a diferencia de lo que acontece en relación con el programa impugnado (numeral 7.4.1.), que la restricción ahí establecida no requiere de

un acto posterior para generar perjuicio a los sujetos a los que va dirigida la aplicación del programa que se aborda en la jurisprudencia en mención, está condicionada a la realización de actos posteriores a su entrada en vigor, como es que el gobernado conduzca un vehículo bajo el influjo del alcohol, así como que sea inspeccionado en un puesto de control; de ahí que dicho criterio no sea aplicable al caso, ni siquiera de forma análoga.

QUINTO.—El Juez concedió el amparo respecto del artículo 7.4.1. del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del Año 2014, toda vez que consideró que vulnera en perjuicio del quejoso el principio de igualdad previsto en el artículo 1o. constitucional.

Para adoptar esa decisión, precisó que el artículo citado hace una distinción entre los vehículos de pasajeros de uso particular modelos dos mil seis y posteriores, y los modelos dos mil cinco y anteriores, sin tomar en cuenta el factor real que determine el nivel de emisión de contaminantes.

Expuso que el segundo grupo queda excluido de la posibilidad de obtener el holograma cero, con independencia de que se ubiquen dentro de los límites de emisiones contaminantes establecidos para los vehículos dos mil seis y posteriores.

Explicó que esa distinción (modelo del vehículo) no cumple con el ordenamiento que la prevé, pues la conservación del ambiente no guarda relación con la antigüedad ni con las condiciones mecánicas de un vehículo, cuyas emisiones sean mayores o menores, por lo que no se trata de una finalidad constitucionalmente válida que la justifique.

Agregó que el hecho de que, en algunos casos, los automotores de modelos recientes gocen de mejores tecnologías para mitigar la emisión de contaminantes, tal circunstancia no constituye una razón absoluta general sino una posibilidad, pues lo objetivamente cierto es que el mantenimiento de los vehículos es el factor real y determinante del nivel de emisión de contaminantes, lo cual puede ser comprobado con la verificación respectiva para que se obtenga el holograma que corresponda.

Con base en esas consideraciones, el Juez concedió el amparo respecto de la restricción prevista en el numeral 7.4.1. a los modelos dos mil cinco y anteriores, para obtener el holograma tipo cero, en la inteligencia de que, para obtenerlo, el automotor del quejoso deberá cumplir con los niveles de emisión de contaminantes o el que corresponda, cuya concesión no exenta al promovente de que, al momento de presentar su vehículo a verificación en la fecha que indica el programa, realice los pagos correspondientes.

Para controvertir esa decisión, la autoridad aduce que la distinción advertida por el Juez tiene como finalidad limitar la circulación de los vehículos en el Distrito Federal en aras de alcanzar una mejor calidad del aire en la ciudad mediante un parque vehicular renovado que emita menos contaminantes, y al fomento de otras formas de movilidad.

Alega que la medida restrictiva es objetiva y razonable, dado que toma como parámetros el desgaste y deterioro que en términos normales sufren los automóviles, tanto por el uso y condiciones generales de mantenimiento, como por el simple transcurso del tiempo, aspectos que inciden en la emisión de partículas contaminantes al ambiente.

Afirma que ese tratamiento diferenciado no es arbitrario, sino que busca alcanzar un objetivo constitucionalmente válido, como es tener un ambiente sano. Alega que la medida está conectada con el fin que persigue, porque los automóviles con antigüedad mayor a ocho años emiten mayor número de contaminantes, de tal manera que resulta razonable.

Agrega que la reducción de la circulación vehicular es una medida que, conjuntamente con otras acciones, contribuye a la reducción de emisiones de contaminantes emitidas a la atmósfera y que permite contribuir a garantizar el derecho que toda persona tiene a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Afirma que, estadísticamente, conforme a los estudios que dieron origen a la Guía metodológica para la estimación de emisiones vehiculares de ciudades mexicanas, está demostrado que un vehículo de menos de ocho años de antigüedad contamina menos que uno de nueve o más, y que aquellos de más de quince años, aun desde su fabricación, contaminan más del doble que uno de modelo reciente.

La síntesis anterior deja en claro que el problema a resolver consiste en determinar si la restricción contenida en la disposición reclamada (7.4.1.) es violatoria del principio de igualdad.

Los agravios propuestos parten de la premisa de que, aun cuando la restricción establecida en la normativa impugnada constituyera una limitante al derecho de igualdad, se encuentra justificada porque se trata de una medida tendente a procurar un ambiente saludable a los residentes de la Ciudad de México.

A fin de resolver los argumentos planteados, se toma en consideración el criterio que informa la tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2010, emitida por

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 427, que establece:

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.—La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de

que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia."

Conforme al criterio invocado, en los casos en que una norma establezca un trato distinto entre dos o más sujetos o grupos en igualdad de circunstancias, a fin de establecer si respeta el derecho de igualdad, debe verificarse si la medida diferenciadora persigue una finalidad constitucionalmente válida, para lo que se debe atender a lo siguiente:

a) La finalidad perseguida con el trato diferenciado debe ser constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) La diferenciación advertida debe ser adecuada para el logro del fin buscado; esto es, que la medida sea capaz de causar su objetivo.

c) La medida legislativa de que se trate debe resultar proporcional, es decir, guardar una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados respecto a los objetivos perseguidos.

Del punto 7.4.1. del programa impugnado se obtiene que sólo podrán obtener el holograma cero los automotores de uso particular modelo dos mil seis y posteriores.

Como se observa, la norma da un trato diferenciado a los propietarios de vehículos atendiendo al modelo de su automotor, pues a los que cuenten con uno dos mil cinco o anterior les está vedada la posibilidad de obtener el holograma cero, aun cuando sus emanaciones de contaminantes pudieran estar dentro del rango establecido para acceder a éste.

Lo anterior se traduce en una restricción para la circulación del vehículo por razón del modelo que no es proporcional y, por tanto, no resulta adecuada para alcanzar el fin que se pretende.

Aun cuando no se desconoce la facultad de la autoridad para emprender acciones para lograr la protección del ambiente y contribuir a una mejor calidad del aire, beneficiando la salud de las personas, lo cierto es que la restricción establecida en el programa de referencia no podría considerarse que su finalidad sea la de proteger el derecho de las personas a un ambiente sano, como sostiene la recurrente.

Lo anterior, en virtud de que la condicionante del modelo del vehículo para tener el derecho a obtener el holograma tipo cero es un aspecto que resulta ajeno al bien jurídico que se pretende tutelar con la disposición normativa –protección al medio ambiente–, puesto que no guarda relación lógica ni existe un nexo causal entre el modelo del vehículo y el grado de afectación al medio ambiente que se produce por la antigüedad del automotor.

Tal afirmación se corrobora con el hecho de que, aun cuando se considerara como válida la afirmación de la recurrente, en el sentido de que el transcurso del tiempo y el uso habitual de los vehículos tienden a originar que sufran desgaste en sus partes, lo cual, eventualmente, pudiera influir en el aumento en la emisión de contaminantes, lo cierto es que el modelo del vehículo no es un elemento que, por sí, sea apto para definir el grado de emisión de contaminantes del automotor.

Es decir, el modelo del vehículo, por sí, no es suficiente para determinar el grado de afectación al ambiente que se genera con su circulación, dado que eso dependerá de si sus niveles de emisiones de contaminantes se encuentran o no dentro de los parámetros legales permitidos.

Atento a lo expuesto, se concluye que la norma en análisis prevé una distinción injustificada entre los propietarios de vehículos automotores, al atender únicamente a su antigüedad, con independencia de su nivel de emisión de contaminantes.

Cabe agregar que los estudios estadísticos invocados por la autoridad, únicamente sirven para anticipar una alta probabilidad de cuáles serán las emanaciones de contaminantes de un vehículo de acuerdo a su antigüedad, pero no demuestran contundente y objetivamente que así sea en todos los casos.

Lo cierto es que si la restricción de acceder a un determinado certificado de verificación y, por tanto, a circular diariamente, contenida en la norma reclamada, tiene como finalidad la protección al ambiente para evitar que circulen automotores que emitan excesivas cantidades de contaminantes, lo objetivamente congruente con la naturaleza de esa medida es que el acceso

al holograma cero dependa del nivel de contaminantes emitidos por cada automóvil, obtenido como resultado de las pruebas que se practiquen a cada vehículo para ese efecto y no, como se establece en el programa en análisis, atender exclusivamente a la antigüedad del automotor que corresponda, al no ser un elemento apto y determinante para fijar el grado de afectación al ambiente que se genera con su circulación.

En consecuencia, resultan infundados los agravios planteados, toda vez que no se puede considerar que la restricción en mención, basada en la sola antigüedad del automotor, sea apta para lograr la finalidad que persigue el programa de verificación vehicular obligatoria impugnado.

Lo anterior, en virtud de que, como se dijo, el objetivo de dicho programa es la conservación y el mejoramiento de la calidad del aire en el Distrito Federal, en tanto que la diferenciación destacada en la norma combatida no es adecuada para el fin buscado, puesto que la conservación del ambiente no guarda relación con la antigüedad de un vehículo, sino con el nivel de contaminantes que emita.

Por tanto, resulta ajustada a derecho la decisión del Juez en el sentido de que el artículo 7.4.1. del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del Año 2014, en la parte conducente a la restricción de obtener el holograma cero, atendiendo al modelo del vehículo y no a sus emisiones de contaminantes, es violatorio del derecho de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que establece un criterio de distinción que no es objetivamente razonable y justificable respecto a los sujetos que se encuentran en idénticas condiciones y circunstancias frente a la norma.

Cobra aplicación al caso la tesis I.1o.A.3 CS (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada el viernes 30 de enero de 2015 a las 09:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*, con registro digital 2008367, que indica:

"VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES.—Conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, de rubro: 'IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITU-

CIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.', para que se considere constitucional una norma que establezca un trato distinto entre dos o más sujetos o grupos en igualdad de circunstancias, es necesario que se acredite que la medida diferenciadora persigue una finalidad válida, para lo cual, además de ser constitucionalmente aceptable, debe ser adecuada para alcanzar el fin buscado y guardar una relación razonable con lo que se pretende obtener. Por su parte, del numeral 7.4.1. del programa mencionado se advierte que sólo podrán obtener el holograma cero los automotores de uso particular modelos dos mil seis y posteriores, de lo que se deduce que dicha norma da un trato diferenciado a los propietarios de vehículos, atendiendo al modelo, pues a los que cuenten con uno dos mil cinco o anterior les está vedada la posibilidad de obtener el holograma cero, aun cuando sus emanaciones de contaminantes pudieran estar dentro del rango establecido para acceder a éste. En consecuencia, no obstante que esta medida no está expresamente prohibida, lo cierto es que no es proporcional y, por tanto, no resulta adecuada para alcanzar el fin que se pretende, lo cual hace que la porción normativa indicada viole el derecho constitucional de igualdad, en virtud de que, si la restricción de acceder a un determinado certificado de verificación y, por tanto, a circular diariamente, contenida en la norma reclamada, tiene como finalidad la protección al ambiente para evitar que circulen automóviles que emitan excesivas cantidades de contaminantes, lo objetivamente congruente con la naturaleza de esa medida es que el acceso al holograma cero dependa del nivel de contaminantes emitidos por cada automotor, obtenido como resultado de las pruebas que se le practiquen para ese efecto y no, como se establece en el programa en cita, atender exclusivamente a la antigüedad del vehículo que corresponda, al no ser un elemento apto y determinante para conocer el grado de afectación al ambiente que se genera con su circulación."

No pasa inadvertido el argumento de la autoridad en el que afirma que el Juez omitió pronunciarse respecto de la justificación año-modelo que formuló en su informe, la cual reprodujo en vía de agravio.

Tal justificación fue abordada en líneas que preceden y se llegó a la conclusión de que no es apta para justificar la constitucionalidad de la medida restrictiva, pues es insuficiente para demostrar fehaciente y contundentemente de qué manera el modelo de los vehículos es determinante respecto del volumen de contaminantes que emiten, de suerte que la falta de valoración en la sentencia no le depara perjuicio.

Máxime que el Juez no estaba obligado a desestimar expresamente las consideraciones expuestas en el informe justificado, tal como se corrobora con

el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 123/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 190, que establece:

"INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.—A diferencia de lo que sucede con los casos de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo."

Aun cuando la jurisprudencia transcrita interpreta los artículos 77 y 149 de la Ley de Amparo abrogada, continúa vigente, porque los artículos correlativos de la actual ley de la materia, esto es, los numerales 74 y 117, respectivamente, tampoco prevén esa obligación.

Finalmente, por lo que hace al agravio relacionado con que el juzgador debió tomar en cuenta el criterio sostenido por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo 1265/2014, en que resolvió que la restricción de que se trata cumple con la finalidad del programa de verificación vehicular, basta decir que dicho precedente no era vinculante para el Juez Federal ni lo es para este tribunal.

Toda vez que los argumentos de la recurrente resultaron ineficaces para revocar la sentencia reclamada, lo procedente es confirmarla.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—En la materia del recurso, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a Fernando Montes de Oca Avilés contra el acto que reclama de la Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, consistente en el numeral 7.4.1. del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del Año 2014, para el único efecto de que, de cumplir con los límites de emisiones de contaminantes que prevé esa norma, se le expida el certificado de verificación y holograma cero, con independencia del modelo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Julio Humberto Hernández Fonseca (presidente), Carlos Ronzón Sevilla y Joel Carranco Zúñiga, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. Conforme al mencionado precepto del programa publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de junio de dos mil catorce, los propietarios de un vehículo modelo dos mil cinco o anterior no pueden aspirar a la obtención del holograma tipo cero y, en consecuencia, no pueden circular todos los días, aun cuando las emisiones de contaminantes de su automotor se encuentren dentro de los parámetros prescritos en la propia norma. Atendiendo al contenido material de esa disposición administrativa, se concluye que es de naturaleza autoaplicativa, toda vez que dicha restricción no requiere de un acto posterior para su aplicación en perjuicio de los sujetos a los que va dirigida, sino que, desde su entrada en vigor, impide a los propietarios de vehículos modelos dos mil cinco o anteriores la posibilidad de obtener el holograma cero.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A. J/7 (10a.)

Amparo en revisión 290/2014. Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 6 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.

Amparo en revisión 354/2014. María Dolores Díaz Castro. 11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Amparo en revisión 386/2014. Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Amparo en revisión 388/2014. Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Amparo en revisión 2/2015. Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES. Conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 42/2010, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.", para que se considere constitucional una norma que establezca un trato distinto entre dos o más sujetos o grupos en igualdad de circunstancias, es necesario que se acredite que la medida diferenciadora persigue una finalidad válida, para lo cual, además de ser constitucionalmente aceptable, debe ser adecuada para alcanzar el fin buscado y guardar una relación razonable con lo que se pretende obtener. Por su parte, del numeral 7.4.1. del programa mencionado se advierte que sólo podrán obtener el holograma cero los automotores de uso particular modelos dos mil seis y posteriores, de lo que se deduce que dicha norma da un trato diferenciado a los propietarios de vehículos, atendiendo al modelo, pues a los que cuenten con uno dos mil cinco o anterior les está vedada la posibilidad de obtener el holograma cero, aun cuando sus emanaciones de contaminantes pudieran estar dentro del rango establecido para acceder a éste. En consecuencia, no obstante que esta medida no está expresamente prohibida, lo cierto es que no es proporcional y, por tanto, no resulta adecuada para alcanzar el fin que se pretende, lo cual hace que la porción normativa indicada viole el derecho constitucional de igualdad, en virtud de que, si la restricción de acceder a un determinado certificado de verificación y, por tanto, a circular diariamente, contenida en la norma reclamada, tiene como finalidad la protección al ambiente para evitar que circulen automóviles que emitan excesivas cantidades de contaminantes, lo objetivamente congruente con la naturaleza de esa medida es que el acceso al holograma cero dependa del nivel de contaminantes emitidos por cada automotor, obtenido como resultado de las pruebas que se le practiquen para ese efecto y no, como se establece en el programa en cita, atender exclusivamente a la

antigüedad del vehículo que corresponda, al no ser un elemento apto y determinante para conocer el grado de afectación al ambiente que se genera con su circulación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A. J/8 (10a.)

Amparo en revisión 290/2014. Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 6 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho.

Amparo en revisión 354/2014. María Dolores Díaz Castro. 11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Amparo en revisión 386/2014. Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Amparo en revisión 388/2014. Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Amparo en revisión 2/2015. Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: José de Jesús Alcaraz Orozco.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2010 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 427.

El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 5/2015, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

AMPARO EN REVISIÓN 6/2015. 19 DE FEBRERO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: NELSON LORANCA VENTURA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—Son infundados por una parte e inatendibles en otra los agravios que se hacen valer.

Argumenta el recurrente que por tratarse de derechos humanos que conciernen a un menor de edad, se acoge al beneficio de la suplencia de la queja, que es una institución que deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual debe ser total y no limitarse a una sola instancia, y que comprende desde el escrito inicial de demanda, hasta el periodo de ejecución de sentencia; que la suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio directa o indirectamente la afectación a la esfera jurídica de un menor, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien promueve el amparo o el recurso de revisión, pues el interés jurídico no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad; que lo anterior, considerando la teleología de las normas relativas, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Agregó que el interés superior del niño, es principio de rango constitucional, y uno de los más importantes del marco internacional de los derechos humanos, reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de ser orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un menor en un caso concreto; principio que ordena la realización de una interpretación sistemática, que para darle sentido a la norma en cuestión tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección a la niñez.

Finalmente, señaló que con base en el anterior marco de referencia, este tribunal debía valorar que la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo **********, se dictó con total carencia de fundamentación y motivación, ya que en ninguno de sus apartados, resultandos, considerandos o puntos resolutivos tomó en consideración que el juicio de amparo se impetró por él; ni procedió al análisis de los conceptos de violación a la luz del principio rector de la suplencia de la queja, ni tomó en consideración el principio de rango constitucional denominado interés superior del niño o de los menores incapaces, por lo que debe revocarse la sentencia y negar el amparo y protección de la Justicia Federal.

En primer lugar, debe decirse que el tercero interesado recurrente a manera de agravios plantea una serie de razonamientos doctrinales y emanados de criterios jurisprudenciales, sin referirlos en ningún momento al fallo que es materia de este recurso; de ahí la necesidad de calificarlos como deficientes.

Dice el recurrente que se acoge al beneficio de la suplencia de la queja. Sobre ese particular es de señalarse que en toda actividad jurisdiccional en que pueda afectarse la esfera de derechos de un menor, se actualiza la aplicabilidad de dicha figura, sin embargo, esto es en razón de los intereses de dicho menor, no así del recurrente propiamente dicho.

En este orden de ideas, no asiste razón al inconforme en virtud de que si bien es cierto que, como ya se dijo, cuando se encuentran involucrados los derechos de un menor de edad, existe obligación por parte de las autoridades que conozcan del juicio de amparo, de suplir los conceptos de violación y los agravios deficientes, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y que, además, en estos casos debe ponderarse el principio de interés superior del niño, al momento de resolver, también lo es que en la especie no existe ya deficiencia que suplir en favor del menor **********, ni puede aplicarse en su beneficio el principio constitucional mencionado.

Lo anterior es así, en virtud de que tomando en consideración las constancias de autos y la narración de antecedentes que obran en la sentencia ya transcrita en esta ejecutoria, se advierte que como correctamente lo asentó el resolutor federal, el Juez familiar responsable, sin fundamento legal que lo facultara para ello dictó el acuerdo de uno de septiembre de dos mil catorce (foja mil trescientos noventa y siete del anexo uno), ordenando dar vista al tercero interesado con los escritos en los que la quejosa solicitaba la ejecución de la sentencia definitiva.

Y en proveído de quince de septiembre de dos mil catorce (foja mil cuatrocientos seis del anexo uno), determinó que una vez que se resolviera un diverso amparo promovido por el tercero interesado, acordaría lo procedente respecto de esa ejecución, no obstante que no se advierte resolución o determinación alguna en la que se hubiera concedido, al mencionado tercero, la suspensión a fin de que no fuera obligado a entregar al menor **********, a su madre, para dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva que estableció su guarda y custodia compartida.

De lo anterior se desprende que ciertamente, como así lo adujo la parte quejosa en su demanda de amparo, no existe razón o motivo para que el Juez responsable no acordara su petición, máxime si en términos del artículo 432 del Código de Procedimientos para el Estado de Puebla, la ejecución de una sentencia es una cuestión de orden público.

Dicho numeral a la letra dice:

"Artículo 432. La ejecución de las sentencias dictadas en asuntos que interesen a la familia o a incapaces, se tramitará de oficio."

Además es relevante señalar que, conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen.

En tal virtud, el desarrollo normal de un menor exige armonía entre éste y la familia y grupo social al que pertenece, que le permita en función de sus capacidades físicas y mentales, una preparación para su vida independiente en sociedad, con plena percepción de respeto a los derechos que asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico.

En esos términos, el primer párrafo del artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "Artículo 637. No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor."

Por ello, el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún

delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal.

Atento a lo anterior, el derecho de convivencia con los progenitores debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior siendo, por tanto, éste de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de ellos cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor.

Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer, tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a proveer lo necesario para que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos.

Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis VI.2o.C.25 C (10a.), de este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver los amparos en revisión 303/2012 y 463/2013 y los directos 497/2013 y 526/2013, con registro digital 2002218, visible en la página 1979, Libro XIV, Tomo 3, noviembre de 2012, Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dispone:

"VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico.

En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: 'No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo Familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor.'. Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo por tanto éste de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer, tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior."

Por otro lado son inatendibles los agravios en los que el inconforme alega que este tribunal debía valorar que la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo **********, se dictó con total carencia de fundamentación y motivación, ya que en ninguno de sus apartados, resultandos, considerandos o puntos resolutivos tomó en consideración que el juicio de amparo se impetró por él; ni procedió al análisis de los conceptos de violación a la luz del principio rector de la suplencia de la queja, ni tomó en consideración el principio de rango constitucional denominado interés superior del niño o de los menores incapaces, por lo que debe revocarse la sentencia y negar el amparo y protección de la Justicia Federal.

Lo anterior es así, en virtud de que la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo **********, es ajena a la litis del presente medio de defensa, pues en este recurso lo que se combate es la sentencia de catorce de noviembre de dos mil catorce, dictada en el expediente **********, por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla.

Independientemente de lo anterior y en el supuesto de que lo que se hubiera querido combatir sea la referida sentencia de catorce de noviembre de dos mil catorce, debe decirse que no asiste razón al inconforme pues si por "resultandos" se entiende la parte de la sentencia en la que se narran los antecedentes del asunto que se va a resolver, y los puntos resolutivos, en materia de amparo, son los que contienen el acto, norma u omisión por los que se concede, niegue o sobresea el amparo y, en su caso, los efectos de la concesión, es inconcuso que los mismos no tienen por qué estar fundados y motivados en la medida en que no contienen argumentos que sustenten la decisión judicial.

Y por lo que hace a la parte considerativa de la sentencia combatida, se advierte de su simple lectura, que el juzgador mencionó como disposiciones aplicables los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 2o., 37 y 107 de la Ley de Amparo; 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 432 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, así como la jurisprudencia 2a./J 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", explicando por qué en su opinión la hipótesis normativa se actualizaba en la especie, por lo que la parte considerativa de la sentencia combatida sí se encuentra fundada y motivada, lo que conduce a declarar infundados los razonamientos que en este sentido se contienen en el proemio del escrito recursal.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VI.2o. J/31 de este cuerpo colegiado, anterior a su especialización en materia civil, con registro digital 227627, visible a página 622, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio-diciembre de 1989, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del *Semanario Judicial de la Federación*, que señala:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto,

siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Sentado todo lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que es apegado a derecho el fallo recurrido, máxime que en él, contrario a lo señalado por el inconforme, sí se tomó en cuenta el interés superior del menor cuyos derechos se dilucidan en la especie.

Debiendo precisarse que la demanda de amparo fue promovida por ********** por su propio derecho y en representación de su menor hijo **********, no por el recurrente, a quien asiste el carácter de tercero interesado.

En las condiciones anotadas lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo y; 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.—Para los efectos precisados en la parte final del considerando cuarto del fallo que se revisa, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por sí y en representación del menor **********, contra los actos que reclamó del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente la tercera de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme a los artículos 635 y 636 del Código Civil para el Estado de Puebla, la convivencia de los menores con sus padres y con la familia de ambos, permite el sano desarrollo de aquéllos, pues conlleva al conocimiento y trato directo que tienen los infantes con sus ascendientes y demás parientes a fin de lograr su cabal integración al núcleo familiar y obtener identidad plena al grupo social al que pertenecen. En tal virtud, el desarrollo normal de un menor se produce en el entorno de éste y su armonía con la familia y grupo social al que pertenece, que le permite y otorga la posibilidad en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad, con la percepción de respeto en razón a los derechos que les asisten a los demás; lo cual se logra alcanzar cuando se garantizan sus derechos a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y fundamentalmente la convivencia con los padres, en tanto que ello no le resulte más perjudicial que benéfico. En esos términos, el artículo 637 de la aludida codificación categóricamente establece: "No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales ni la convivencia entre el menor y sus parientes, ni siquiera cuando la patria potestad o la guarda corresponda a uno de ellos, por lo que en caso de oposición a la solicitud de cualquiera de ellos o incumplimiento del convenio en que las partes hubieren fijado el tiempo, modo y lugar para que los ascendientes que no tengan la guarda del menor lo visiten y convivan con él, el Juez de lo familiar resolverá lo conducente, en atención al interés superior del menor. ...". Por ello el tribunal contará con los medios eficaces que considere necesarios para decretar la convivencia en el modo y forma que beneficie a los menores y en caso de incumplimiento parcial o total podrá decretar las medidas de apremio que concede la ley o dar vista al Ministerio Público si del comportamiento de quien deba permitir la convivencia se desprende algún delito; y que sólo por mandato judicial expreso y fundado en causa justa podrá impedirse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere dicho dispositivo legal. Atento a lo cual, el derecho de visita y convivencia con sus progenitores, debe catalogarse como un derecho fundamental del menor porque es tendente a proteger su interés superior, siendo éste por tanto de orden público y de interés social, y sólo se impedirá esa convivencia con alguno de sus padres cuando se estime razonadamente que resultaría más perjudicial que benéfico al menor. Por lo que, ante tal situación, en aras de ese

supremo derecho que tienen los niños a ser amados y respetados, sin condición alguna, por regla general sus progenitores deben ejercer tanto la guarda y custodia, como el derecho de visita y convivencia, en un ambiente de comprensión y respeto para con sus hijos, procurando en todo momento su pleno desarrollo físico y mental. Y, concatenadamente, la autoridad judicial se encuentra obligada a que los menores puedan gozar de ese máximo principio de convivir con ambos padres y las familias de éstos, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de proteger ese interés superior.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.C. J/16 (10a.)

Amparo en revisión 303/2012. 24 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

Amparo en revisión 463/2013. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

Amparo directo 497/2013. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Nelson Loranca Ventura.

Amparo directo 526/2013. 13 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

Amparo en revisión 6/2015. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Nelson Loranca Ventura.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis destacan las diversas aisladas 1a. CCCVI/2013 (10a.) y 1a. CCCVIII/2013 (10a.), de rubros: "GUARDA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD Y RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. SON INSTITUCIONES PARALELAS Y COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS INTRAFAMILIAR." y "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN.", que aparecen publicadas en el S*emanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, páginas 1051 y 1063, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUTORIAS Y TESIS
QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA

A

ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO "PADRASTRO" PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. La mencionada fracción prevé como circunstancia que agrava el delito de abuso sexual el hecho que sea cometido por el "padrastro" contra su hijastro; expresión semántica de calidad cualitativa del activo que requiere de valoración normativa –jurídica y cultural–. Así, conforme a los métodos sistemático y analítico de los artículos 291 Bis, 291 Ter, 291 Quáter y 293 del Código Civil para el Distrito Federal, se colige –en tutela judicial efectiva, pro persona e interés superior del menor–, que ese activo no es únicamente el "marido", esto es, aquella persona que ha contraído matrimonio civil con la madre del hijo que fue procreado con una pareja anterior, sino que ese carácter también lo tiene quien ha establecido una relación en "unión libre" (concubinato) con dicha madre, al adecuarse a los fundamentos amplios de la familia, derechos y obligaciones, la cual genera el parentesco por afinidad entre los concubinos y sus respectivos parientes consanguíneos. Luego, en el caso, "padrastro" no es sólo quien se constituye como esposo de la mujer, sino también aquel que, voluntariamente decidió vivir en "unión libre" y determinarse voluntariamente como padrastro, al establecer una relación de pareja estable con la madre de la víctima.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.75 P (10a.)

Amparo directo 347/2014. 11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretaria: Ma. de los Ángeles Baños Rojas.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR

OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES. En los sistemas jurídicos tradicionales el concepto "justicia" se ha asimilado al conjunto de instituciones, procedimientos y operadores que intervienen en la dinámica de la resolución de desacuerdos legales dentro del aparato jurídico formal. De acuerdo con esta concepción formalista, las únicas autoridades que se encontrarían obligadas a la observancia del derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos serían las que realizan funciones materialmente jurisdiccionales. No obstante, esta visión restringe la aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo 1o., párrafo tercero, de la propia Norma Suprema, pues el acceso efectivo a la solución de desacuerdos constituye un derecho dúctil que tiende a garantizar la concreción de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio efectivo de derechos de los gobernados dentro de las organizaciones jurídicas formales o alternativas. Por tanto, en congruencia con el principio aludido, la protección del derecho fundamental citado debe extenderse a los mecanismos administrativos de tutela no jurisdiccional que tengan por objeto atender una solicitud, aun cuando ésta no involucre una controversia entre partes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.48 A (10a.)

Amparo en revisión 84/2014. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU RESOLUCIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LO QUE SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE NUEVE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De los artículos 373, 374, 377, 380, 381, 384 a 388 y 392 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del nueve de agosto de dos mil cuatro, se advierte que la aclaración de sentencia forma parte integrante del fallo de primera instancia, y su promoción interrumpe el plazo para la interposición del recurso de apelación, que es de nueve días contados a partir del día siguiente a la notificación de la

sentencia definitiva. De modo que el citado término para la apelación, se interrumpe hasta en tanto no se resuelva la aludida aclaración de sentencia, pues es hasta ese momento que el fallo de primera instancia adquiere el carácter de definitivo y la resolución de la aclaración forma parte de la sentencia definitiva, por lo que ambas resoluciones constituyen un solo acto procesal para efectos de su impugnación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.C.57 C (10a.)

Amparo directo 508/2014. Patricia Meneses Ortega. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

Amparo directo 552/2014. Blanca Estela Ortega Castillo. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. LOS CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES EMANADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, COMO LA ORDEN DE TRASLADO DEL SENTENCIADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. Cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados las resoluciones que emanan de la ejecución de la pena, como la orden de traslado del sentenciado de un centro de reclusión a otro, para cumplir con la pena de prisión impuesta, se está en presencia de actos dictados dentro del procedimiento, pues dicho mandato es emitido dentro de una de las fases que lo componen, como lo es la ejecución de la sentencia, que se encuentra prevista en la fracción VI del artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
III.2o.P.75 P (10a.)

Amparo en revisión 343/2014. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretaria: María Yolanda Ascencio López.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACTUACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SON VÁLIDAS LAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD DECLARADA INCOMPETENTE POR DECLINATORIA Y, POR TANTO, LAS REALIZADAS POSTERIORMENTE, AL SER INDEPENDIENTES Y NO VERSE AFECTADAS DEBEN CONSERVARSE. Atento al principio de conservación de las actuaciones

en materia mercantil, establecido en el artículo 1117 del Código de Comercio, una vez resuelta la excepción de incompetencia por declinatoria, de determinarse que la autoridad incompetente es la que primeramente conoció del asunto, ello no implica dejar sin efectos o declarar la nulidad de las actuaciones practicadas en el juicio de su conocimiento, pues si bien la nulidad de un acto procesal determina la de los que dependan de éste y están viciados por falta del requisito esencial que la determinó, lo que implica que se declare de oficio o a instancia de parte, retrotrayendo las actuaciones al momento en que se produjo el defecto. No obstante, si algún acto de los realizados no se ve afectado y, por tanto, es independiente, se impondrá su conservación para evitar repeticiones inútiles que nada añadirían. Así, el principio de conservación de las actuaciones procesales, en cuanto reflejo del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, tiene relación con los de economía procesal y estabilidad, que restringen la potencial privación de efectos de actuaciones que sería inútil volver a verificar en el procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.218 C (10a.)

Amparo en revisión 129/2014. Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del fideicomiso número F/169852, únicamente en representación del patrimonio "A" de dicho fideicomiso. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACTUACIONES JUDICIALES CARENTES DE FIRMA Y/O NOMBRE Y APELLIDO DE QUIENES EN ELLAS INTERVIENEN. AL CARECER DE EFICACIA JURÍDICA, DEBEN DECLARARSE INVÁLIDAS, LO QUE GENERA SU NULIDAD [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.) A LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA]. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en las jurisprudencias 2a./J. 151/2013 (10a.) y 2a./J. 62/2014 (10a.), publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 573, de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA." y en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de

2014, página 1089, de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.), DE RUBRO: 'ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA.'. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN.", estableció que tanto las actuaciones judiciales, como las de las autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para ser válidas requieren contener la firma autógrafa, el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan, así como que tal criterio es aplicable respecto de actuaciones procesales o intermedias, sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas a partir del 11 de diciembre de 2013, fecha en la que terminó la distribución del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, correspondiente al mes de noviembre del mismo año, en el que se publicó la jurisprudencia citada en primer término. Sin embargo, como la referida Sala, para determinar el ámbito temporal de aplicación del criterio aludido, partió de la base de que el marco constitucional vigente a partir del 3 de abril de 2013, prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna (artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor), no existe impedimento legal para su aplicación en juicios de amparo regidos por la ley de la materia abrogada, porque es acorde con las disposiciones aplicables en este último dispositivo legal, en la que la jurisprudencia, al concretarse a interpretar la ley, no viola el principio de retroactividad y no hay impedimento para aplicarla a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN.

(IX Región)1o.3 K (10a.)

Amparo directo 293/2013 (cuaderno auxiliar 982/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Cristina Pérez Montes. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Mauricio Maycott Morales. Secretario: Jorge Patricio Sánchez Ortiz.

Amparo directo 294/2013 (cuaderno auxiliar 983/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. GEO Guerrero, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Mauricio Maycott Morales. Secretario: Jorge Patricio Sánchez Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y OFICINAS FEDERALES DEL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y SE DELEGAN FACULTADES EN SUS TITULARES. SU ARTÍCULO 3 NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA PARTE CORRESPONDIENTE AL CITARSE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL. El artículo 3 del Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y se delegan facultades en sus titulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil cinco, establece que dicha secretaría contará con delegaciones en los Estados de la República (no en el Distrito Federal) y que sus circunscripciones territoriales comprenderán la totalidad de los Municipios de cada uno. De tal forma, si bien el precepto no se encuentra dividido en apartados, fracciones, incisos o subincisos, no constituye una norma compleja, dado que su contenido no genera incertidumbre ni inseguridad jurídica, al existir una correlación entre las delegaciones y el Estado al que corresponden, sin que se advierta que un Estado comprenda más de una delegación, o bien, que ésta comprenda dos o más Estados u otras demarcaciones territoriales, por lo que no se requiere la transcripción de la parte correspondiente del citado numeral relativa a la circunscripción territorial específica, al citarse como fundamento de la competencia, máxime que su extensión es de sólo cuatro párrafos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.A.87 A (10a.)

Amparo directo 402/2014. 25 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO ADHESIVO. EL TERCERO INTERESADO QUE LO PROMUEVE NO SE CONVIERTE EN UN QUEJOSO ADHERENTE, SINO QUE CONSERVA ESE CARÁCTER. Conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de amparo son: el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y el Ministerio Público Federal; asimismo, para efectos del amparo directo, la calidad de tercero interesado sólo puede recaer en: i) la contraparte del quejoso en el juicio de origen; ii) la víctima u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño o al reclamo de la responsabilidad civil en asuntos del orden penal; y, iii) el Ministerio Público que intervino

en el juicio penal de origen. Lo anterior, dado que dicha vía constitucional sólo procede contra sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio en términos del artículo 170 de la referida ley. Así, dichos terceros interesados, salvo el Ministerio Público, tienen el derecho de promover amparo adhesivo en términos del artículo 182 de la ley de la materia, con la finalidad de que, desde ese momento, hagan valer violaciones procesales que pudieran trascender al resultado del fallo, para evitar que precluya su derecho, o bien, para exponer argumentos que refuercen las consideraciones que sustenten el resolutivo que les favorece o que tienen interés jurídico en que subsista, o para controvertir un punto decisorio favorable que indirectamente les perjudique. Luego, dado que el amparo adhesivo es accesorio del principal –pues sigue la suerte procesal de éste–, el tercero interesado que lo promueve no se convierte en un quejoso adherente, porque no es un quejoso en estricto sentido, ya que no solicita amparo contra el acto reclamado por violación a sus derechos fundamentales en tanto que su sentido no le perjudica, sino que su pretensión es convencer al juzgador federal que el acto reclamado es correcto por las razones que lo sustentan o por otras que propone con el fin de que tal sentido prevalezca. Consecuentemente, el tercero interesado que promueve el amparo adhesivo conserva ese carácter, es decir, no se convierte en un quejoso adherente; máxime que éste no está reconocido como parte en la propia ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.76 K (10a.)

Amparo directo 432/2014. Miguel Erosa Cruz. 18 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO ADHESIVO. LO QUE JUSTIFICA SU ESTUDIO ES LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PRINCIPAL. La interpretación sistemática y teleológica de los artículos 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo, pone de manifiesto que, en la procedencia del amparo adhesivo ya no aplica la teoría de la afectación, porque la adhesión se ve concomitantemente con la demanda principal del juicio, ya que lo pretendido por el quejoso adhesivo es que no se conceda el amparo, es decir, comparece sin haber afectación alguna que haya trascendido a su esfera jurídica, a fin de que el sentido de la sentencia o laudo reclamado siga rigiendo

en el caso concreto. No obstante lo anterior, deben cumplirse ciertos requisitos para que se legitime la acción de amparo adhesivo, pues aun cuando no se requiera afectación a la esfera jurídica del adherente, lo cierto es que, por regla general, procederá para fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo o aquellas atinentes al fondo que no fueron examinadas por la autoridad responsable, a fin de no quedar indefenso, o bien, cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Por tanto, lo que justifica el estudio del amparo adhesivo es la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el principal, pues al otorgarse el amparo se causa una afectación al adherente, por lo que deben analizarse los conceptos de violación que expuso y, necesariamente, debe negarse u otorgarse el amparo por lo que ve a las violaciones procesales alegadas. Supuesto diferente sería en el caso de que se negara el amparo al quejoso principal, pues en tal hipótesis sería innecesario examinar los argumentos adhesivos, al haber quedado sin materia el objeto de estudio en el amparo adhesivo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.A.T.20 K (10a.)

Amparo directo 102/2014. Sergio Núñez Jacobo. 8 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 49/2014 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO ES PROMOVIDO CON LA FINALIDAD DE OFRECER ARGUMENTOS ENCAMINADOS A QUE SUBSISTA EL ACTO RECLAMADO EN SUS TÉRMINOS PERO EL JUICIO DE AMPARO PRINCIPAL NO PROSPERE POR CUESTIONES PROCESALES O POR DESESTIMARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 177.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO DIRECTO. NO ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO EN LA CAUSA DE ORIGEN CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, SI EL SENTENCIADO TAMBIÉN HIZO VALER ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN EL CUAL FUE ADMITIDO POR EL TRIBUNAL UNITARIO SEÑALADO POR AQUÉL COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El amparo promovido por quien se ostenta como ofendido en el proceso penal, en el que reclama

de un Tribunal Unitario la inadmisión del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de primera instancia, no es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito si el sentenciado también hizo valer ese medio ordinario, el cual fue admitido por el Tribunal Unitario señalado por la supuesta víctima como autoridad responsable, pues en este caso, dicha inadmisión no constituye una resolución definitiva para efectos de la procedencia del amparo directo, en tanto que el recurso por el que se continuó el trámite (el del inculpado), obstaculiza que la resolución de primer grado se declare cosa juzgada, porque no se da el caso de que la sentencia del juicio natural quede firme por el hecho de la negativa a admitir el recurso, toda vez que aquélla puede ser confirmada, modificada o revocada, al resolverse el recurso de apelación promovido por la parte contraria, que en el caso es el enjuiciado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
III.2o.P.74 P (10a.)

Amparo directo 252/2014. 22 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Angélica Ramos Vaca.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión 234/2014 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, emitió la tesis (V Región)5o.18 L (10a.), en la que sostuvo que aun cuando el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria que declara improcedente la excepción de incompetencia planteada en un juicio laboral, no encuadra en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstas en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, atinentes a actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo cierto es que se ubica en la fracción V de dicho precepto, relativa a actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la incompetencia planteada involucra a órganos jurisdiccionales de distinto régimen, como lo son la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a abandonar ese criterio

y a sostener que, tratándose de la resolución de una cuestión de competencia, como lo es aquella que determina que el juzgador de origen sí es competente para conocer la acción ejercida ante él y dilucidar el juicio correspondiente y no el órgano perteneciente a un régimen distinto, el amparo indirecto es improcedente, ya que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación como lo establece la referida fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no trae aparejada consigo una ejecución que lesione materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, independientemente de que la cuestión de incompetencia planteada comprenda órganos jurisdiccionales de regímenes distintos y que, al resolverse dicha cuestión, implícitamente se determine cuál es la legislación aplicable conforme a la cual será analizada y resuelta la litis, atendiendo precisamente al régimen al que se encuentre sujeto el órgano declarado competente, reflejándose, de esa manera, en las cuestiones de fondo, dado que ello no representa un impedimento en el libre ejercicio de alguno de los derechos sustantivos a la libertad, propiedad, posesión u otros semejantes, como los derechos de familia o los que nacen de las relaciones de trabajo, entre otros y, por lo mismo, no involucran su afectación material, sino que la resolución indicada sólo tiene el efecto de someter a las partes a las determinaciones que se tomen dentro de un procedimiento jurisdiccional para dilucidar el juicio y resolver la controversia, lo que significa una afectación a derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, y que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, por lo que la asunción de la competencia sólo podrá controvertirse al promoverse el amparo directo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.

(V Región)5o.20 L (10a.)

Amparo en revisión 167/2014 (cuaderno auxiliar 666/2014) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. 27 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Secretaria: Libia Zulema Torres Tamayo.

Nota: Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal, en la diversa (V Región)5o.18 L (10a.), de título y subtítulo: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA EN MATERIA LABORAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE INVOLUCRE AUTORIDADES DE DISTINTO RÉGIMEN (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas y

en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 816.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ARRAIGO. EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 4 DE ENERO DE 2012, QUE PERMITÍA DECRETARLO CONTRA EL INDICIADO, SIN ESPECIFICAR RESPECTO DE QUÉ DELITOS, VULNERA EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la figura del arraigo se reguló en el artículo 16, párrafo octavo, y se estableció su procedencia única y exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, materia en la cual, por disposición expresa del precepto 73, fracción XXI, inciso b), constitucional, corresponde legislar sólo al Congreso de la Unión. En ese sentido, el artículo 121 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial local el 4 de enero de 2012, que permitía el arraigo del indiciado, sin especificar respecto de qué delitos, por lo que se entiende que procedía en cualquiera, siempre que se actualizaran los supuestos a que alude (que atendiendo a las características del hecho imputado y a las circunstancias personales del probable responsable, permitan presumir fundadamente su intención de eludir la acción de la justicia), vulnera el mencionado artículo 16, párrafo octavo, constitucional, porque dicha medida únicamente puede decretarse respecto de delitos de delincuencia organizada; además de que una norma local ya no puede establecer y regular esta figura, en tanto que la facultad accesoria del arraigo únicamente se encuentra a cargo de las autoridades federales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.P.21 P (10a.)

Amparo directo 360/2013. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Marcela Elizabeth García Cante.

Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR

JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

En relación con el alcance de la presente tesis destaca la diversa aislada 1a. CCXLVII/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 442, de título y subtítulo: "ARRAIGO LOCAL. LA MEDIDA EMITIDA POR EL JUEZ ES INCONSTITUCIONAL."

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ARRENDAMIENTO. EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE RENTAS, NO PUEDEN CONSIDERARSE USURARIOS SI NO REBASAN LA SUERTE PRINCIPAL. Atento a la naturaleza de los juicios de arrendamiento, cuando los intereses moratorios no rebasan la suerte principal no puede considerarse que exista usura, al ser una pena sancionatoria que alerta a las partes sobre el riesgo por el incumplimiento. En otro aspecto, el artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que la cláusula penal no puede rebasar el monto de la obligación principal y se establece como sanción para aquel que viola el pacto asumido o prevé el monto del daño o perjuicio ocasionado por el incumplimiento. En ese contexto, la cláusula penal se pacta usualmente para apremiar al deudor a que cumpla con lo que convino en los términos en que lo hizo, o sea, que la pena convencional atiende al incumplimiento o morosidad en sí mismos considerados. El objeto esencial de la pena convencional es indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios o por la falta de cumplimiento de la obligación por lo que se fija como parámetro máximo que la pena no exceda en la cuantía del valor de la obligación principal, lo que es legal puesto que, de no estimarse así, se halagaría con un incentivo poderoso al acreedor que sería estéril al tratarse de un gravamen injusto, insoportable y usurero. Es verdad que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tengan la obligación de promover, respetar, proteger y garantizarlos. Sin embargo, no puede existir usura en un contrato de arrendamiento cuando el interés moratorio que equivale a la pena convencional en su sentido de inhibir el incumplimiento y alertar de sus consecuencias al deudor, siempre que cualquiera de esas figuras que se fije por las partes, no exceda del valor de la obligación principal, parámetro que es legal, justo y equitativo mediante el cual se pretende inhibir el incumplimiento de las obligaciones por alguna de las partes celebrantes y desincentivar el retraso en el cumplimiento de las

obligaciones a plazo. Lo anterior, debido a que se trata de una pena sancionatoria que privilegia las condiciones indemnizatorias, fijada en forma expresa y anticipada por las partes, con la limitante que tiene la prohibición de exceder del valor de la cuantía de la obligación principal que se reclama. Bajo ese contexto los intereses moratorios son el equivalente a una pena convencional sancionatoria, que el acreedor (arrendador) tiene derecho a recibir del deudor (arrendatario) pactada a título de indemnización ante el incumplimiento de la obligación, así como los perjuicios que constituyen la imposibilidad fáctica de usar y disfrutar del bien arrendado (o de darlo en arrendamiento a otra persona que sí pueda cubrir cabalmente el precio de la renta); y la ganancia lícita dejada de percibir durante todo el tiempo en que el deudor haya omitido el pago al que estaba obligado. Estimar lo contrario privaría al arrendador del derecho a ser resarcido por el daño y perjuicio causados, así como de la ganancia lícita dejada de percibir durante el tiempo en que el arrendatario omita hacer el pago a que estaba obligado, teniendo un impacto en la economía de manera negativa, lo que genera un factor de intranquilidad en el mercado de arrendamiento desacelerando las rentas y la disposición de locales comerciales para arrendar por el riesgo y pérdida que los arrendadores corren, desincentivando el mercado y la economía de ese sector. Consecuentemente, los intereses moratorios generados con motivo del incumplimiento del pago de rentas, no pueden considerarse usurarios, si no rebasan la suerte principal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.170 C (10a.)

Amparo directo 388/2014. Moratex, S.A. de C.V. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Montserrat C. Camberos Funes.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

B

BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. SU PRESIDENTE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación del artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que los particulares pueden tener el carácter de autoridades responsables siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos: a) que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omitan actuar en determinado sentido; b) que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, c) que sus funciones estén determinadas en una norma general. La Bolsa Mexicana de Valores, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, es una persona moral de naturaleza privada, como también lo son las casas de bolsa que, por disposición de la Ley del Mercado de Valores, están facultadas para operar en aquélla. En ese sentido, si el mercado de valores es un servicio que presta un particular a quienes, de forma voluntaria, quieren intervenir en él con propósitos de inversión o de financiamiento, vínculo que se entabla por virtud de la celebración de acuerdos mercantiles, se concluye que el presidente de la referida sociedad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues todos los actos jurídicos que lleve a cabo en relación con dicha actividad, aunque encuentren sustento en normas de carácter general (Ley del Mercado de Valores y Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores), tienen como fuente original un pacto entre particulares; de ahí que no sean equivalentes a los de una autoridad, cuya naturaleza se identifica por la unilateralidad y su obligatoriedad, sin importar el consenso del particular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.25 K (10a.)

Amparo en revisión 6/2015. Jorge Ernesto Portillo Iniestra. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

C

CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA DETERMINAR DERECHOS POR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SE CONFIGURA EN EL PLAZO DE CINCO AÑOS, CONTADO A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ O DEBIÓ HABERSE PRESENTADO LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE SEA APLICABLE EL DE DIEZ, AL NO TRATARSE DE UNA CONTRIBUCIÓN CALCULADA POR EJERCICIOS. De conformidad con el artículo 67, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, las facultades de las autoridades para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales se extinguen en el plazo de cinco años, que se cuenta, en el caso de contribuciones que no se calculan por ejercicios, a partir de que se presentó o se debió haber presentado la declaración respectiva. Por otra parte, el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos dispone que el derecho por el uso del espectro radioeléctrico se pagará anualmente, dentro de los meses de enero a junio, de lo que se sigue que se está en presencia de una contribución que no se calcula por ejercicios, sino que la ley establece una tarifa por un periodo determinado de utilización del bien nacional. En consecuencia, la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para determinar este tipo de derechos se configura en el plazo de cinco años, contado a partir de que se presentó o debió haberse presentado la declaración correspondiente, sin que resulte aplicable la porción del artículo 67 citado que dispone: "el plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio", pues dicho plazo únicamente está previsto para contribuciones calculadas por ejercicios, lo que no ocurre con los derechos por el uso del espectro radioeléctrico.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.42 A (10a.)

Amparo en revisión 15/2014. DHL Express México, S.A. de C.V. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: María Luisa Cervantes Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)].

AMPARO EN REVISIÓN 216/2014. 15 DE ENERO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. PONENTE: JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. SECRETARIA: CARMEN YADIRA REYES MUÑOZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Sobreseimiento del juicio.

Resulta innecesario realizar la reseña del material probatorio que obra en el expediente de donde deriva el presente juicio de amparo en revisión, así como de la resolución impugnada (en la que por cierto el Juez de Distrito negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión) y los agravios esgrimidos por las partes recurrentes, pues se advierte que en el juicio constitucional sobrevino una causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de la materia, lo que da lugar, en términos del diverso numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, al sobreseimiento en el juicio.

Al respecto, cobra cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (sic) cuyo rubro es: "IMPRO-

CEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE."[12]

I. Causa de improcedencia que se actualiza.

En efecto, este Tribunal Colegiado considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que cesaron los efectos del acto reclamado.

Para arribar a la anterior afirmación, primeramente se hace necesario reseñar los siguientes antecedentes:

1. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia de control de detención, en la sala cuatro del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, deducida de la carpeta administrativa **********, seguida en contra de ********** y ********** ambos de apellidos **********, y otros, por los hechos delictuosos de violación y actos libidinosos, en agravio de los menores de edad de identidad resguardada de iniciales **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

Una vez abierto el debate entre las partes respecto a calificar o no de legal la detención de los justiciables, el Juez de la causa decretó la misma en contra de **********, por el delito de actos libidinosos, en agravio de los menores de identidad resguardada de iniciales ********** y **********.

Respecto de **********, se determinó la detención judicial por el hecho delictuoso de actos libidinosos, en agravio del menor de edad de identidad resguardada **********.

Ilícitos previstos y sancionados por los artículos 270, párrafos primero y segundo, 6, 7, 8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso c), del Código Penal del Estado de México.

En esa misma audiencia, el fiscal formuló imputación contra los justiciables y solicitó verter argumentos vinculatorios.

---

[12] Jurisprudencia visible en la página 295, Tomo XXVI, agosto de 2006, Novena Época del *Semanario Judicial del la Federación y su Gaceta.* (sic)

Posteriormente, la defensa de los recurrentes y éstos, solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, plazo que fue acordado de conformidad por el juzgador.

Finalmente, el Ministerio Público pidió se impusiera a los justiciables como medida cautelar la prisión preventiva.

Por lo que, con fundamento en los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos 5, 10, 180, 192, fracción XIII, 194, apartado A, fracción II y apartado B, fracciones I, II y IV y el diverso 196 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el resolutor de origen decretó como medida cautelar personal la consistente en prisión preventiva justificada.

2. Del acta mínima de cuatro de febrero de dos mil catorce, se advierte que tuvo verificativo la audiencia relativa a la prórroga del plazo constitucional, donde el fiscal expuso los argumentos en que justificó la solicitud de vincular a proceso a los imputados y aportó los datos de prueba en que sustentó su petición; sin que esas circunstancias fueran controvertidas por la defensa.

3. En diligencia de cinco de febrero de dos mil catorce, el titular del Juzgado de Control decretó auto de vinculación a proceso en contra de ********** y ********** ambos de apellidos **********, y otros, por el hecho delictuoso de actos libidinosos, en agravio de los menores de edad de identidad resguardada de iniciales ********** y **********.

En esa misma audiencia se acordó el plazo de seis meses para el cierre de la investigación.

4. Luego, los justiciables mediante escritos presentados el diez de febrero de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en su calidad de autoridad ordenadora y el director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de esa misma localidad, en su calidad de autoridad ejecutora, señalando como acto reclamado la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce, mediante la cual se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, decretada dentro de la carpeta administrativa **********.

Así, por razón de turno correspondió el conocimiento de las demandas de amparo promovidas al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México,

con residencia en esta ciudad, cuyo titular, mediante proveído de doce de febrero de dos mil catorce, decretó la acumulación de los juicios ********** y **********, entre otros, bajo el número de expediente **********.

Seguidos los trámites de ley correspondientes, el uno de abril de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en la cual se resolvió negar a los quejosos el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

5. Inconformes con la decisión del Juez Federal, los quejosos interpusieron recurso de revisión, presentado el diecinueve de junio de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México.

De dicho medio de impugnación correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, cuyo presidente, por auto de cuatro de agosto de dos mil catorce, admitió a trámite y se ordenó su registro bajo el número R.P. 216/2014.

6. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, los recurrentes presentaron diverso escrito en el cual se desistieron del recurso de revisión que se resuelve, en virtud de la solicitud de apertura del procedimiento abreviado, ante el Juez de la causa.

7. El veinte de agosto posterior, se requirió a las partes para que ratificaran dicho desistimiento, apercibidos que de ser omisos se continuaría con la tramitación del mismo, ordenándose la notificación personal de dicho proveído, diligencia que fue llevada a cabo en el domicilio señalado por los inconformes en el escrito de expresión de agravios, dejando citatorio, a fin de lograr su comparecencia.

8. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, se notificó por lista al recurrente ********** (representante común), el acuerdo de veinte de agosto de dos mil catorce.

9. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, se ordenó turnar el asunto a la ponencia del Magistrado Jorge Arturo Sánchez Jiménez, a efecto de formular el proyecto de resolución que corresponda.

10. El veintinueve de octubre de la misma anualidad, el Magistrado ponente formuló su dictamen a fin de regularizar el procedimiento y notificar de forma personal a los recurrentes internos en el Centro Preventivo y de Readaptación Social en Chalco, Estado de México, ya que si bien se había realizado la diligencia de referencia en el domicilio señalado, al tratarse de un

desistimiento y estar éstos privados de su libertad, debían ser notificados de forma personal en el interior del centro preventivo.

11. El treinta y uno de octubre siguiente, el actuario judicial adscrito a este tribunal federal se constituyó en el interior del centro preventivo, a fin de notificar a los recurrentes el proveído de veinte de agosto pasado; sin embargo, le fue informado que el cinco de septiembre de dos mil catorce los ahora recurrentes habían obtenido su libertad inmediata y absoluta, al haberse decretado el sobreseimiento de la causa penal **********.

12. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, se requirió al Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, informara sobre el estado procesal de la carpeta **********, así como del cambio de situación jurídica de los recurrentes, remitiendo dicho informe el siete de noviembre siguiente.

Al respecto indicó que las partes habían llegado a un acuerdo reparatorio, originando el sobreseimiento en la carpeta administrativa; por ende, cesaron los efectos de las medidas cautelares impuestas y el asunto había adquirido la calidad de cosa juzgada; en consecuencia, se ordenó la libertad inmediata y absoluta de ********** y ********** ambos de apellidos **********.

Circunstancia que fue corroborada con la copia certificada, remitida por el Juez de origen a este órgano colegiado el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, respecto del acta mínima de audiencia de cinco de septiembre de que se trata.

13. Mediante acuerdo de veintisiete de noviembre siguiente, se ordenó devolver los autos a la ponencia del Magistrado relator.

Conforme a los antecedentes narrados es posible advertir en forma clara y evidente que en el presente asunto se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es:

"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"…

"XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

"…".

Asimismo, el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, establece:

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

"...

"V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

"...".

El análisis gramatical de la fracción de tal precepto permite precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el verbo "cesar" como: Dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa.

Por otra parte, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada "Lecciones de Amparo",[13] opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando:

Éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga.

Luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente ..." y concluye que "... únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada".

---

[13] Editorial Porrúa, México 1997, páginas 497 y 498.

Asimismo, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido las siguientes tesis:

La número 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.—De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."[14]

La número 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.—Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."[15]

---

[14] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38.
[15] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210.

La número P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dice:

"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.—La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad."[16]

Conforme a lo anterior, es evidente que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada.

Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del mismo, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.

En efecto, la improcedencia de que se trata se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agra-

[16] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 71.

viado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija.

Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no existe motivo para la promoción o resolución de fondo del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia.

En esa tesitura, es patente que de la interpretación de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la ley de la materia se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella.

En atención a lo anterior, es inconcuso que tal circunstancia acontece en el asunto particular, en virtud de que si bien es cierto que existe el acto reclamado, consistente en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce, en la cual se decretó imponer a los recurrentes ********** y ********** ambos de apellidos **********, como medida cautelar personal la consistente en prisión preventiva justificada, lo cierto es que de autos se desprende que en la carpeta administrativa de donde deriva la misma, se declaró la extinción de la acción penal y, por ende, el sobreseimiento, conforme al artículo 302, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.

En efecto, en el expediente de revisión, se cuenta con la comunicación oficial del Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, a través de la cual remitió copia certificada de la audiencia de cinco de septiembre de dos mil catorce, de la que se observa que las partes (imputados y ofendidos) llegaron a un acuerdo reparatorio, consistente en el pago de la reparación del daño; por lo que, al tener por cumplidas las obligaciones pactadas, se decretó la extinción de la acción penal y conforme al artículo 302 del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de México se determinó el sobreseimiento en la carpeta administrativa **********, en favor de ********** y **********, ambos de apellidos **********, por el hecho delictuoso de actos libidinosos, en agravio de los menores de edad de identidad resguardada de iniciales ********** y **********.

Por consiguiente, es evidente que al decretarse el sobreseimiento en la carpeta administrativa de origen, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado consistente en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce, en la cual se decretó imponer a los recurrentes ********** y ********** ambos de apellidos **********, como medida cautelar personal la consistente en prisión preventiva justificada, quedó sin efecto.

Es así, pues se resolvió en definitiva el asunto, sin entrar al fondo y conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad de analizarlo.

En ese tenor, se insiste que la determinación de treinta y uno de enero de dos mil catorce quedó insubsistente con la diversa de cinco de septiembre de la misma anualidad, por lo cual, es evidente que volvieron las cosas a una situación similar a la que guardaban antes de la emisión del acto reclamado, restituyéndose así a las quejosos en el goce del derecho humano que estimaban violado y afectaba su esfera jurídica.

En efecto, el resultado del sobreseimiento fue la libertad absoluta de los justiciables, en ese orden de ideas, se debe decir que los promoventes ********** y ********** ambos de apellidos **********, no pueden obtener mayor beneficio en una sentencia de amparo, que la libertad ya decretada por la autoridad natural, en los autos de la carpeta administrativa **********.

Lo anterior, sin lugar a dudas evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, ante la cesación de los efectos del acto reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco y al director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de la misma localidad, ambos en el Estado de México, porque pone de manifiesto que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación de que se duelen los inconformes.

Es así, ya que se dejó insubsistente la medida cautelar personal de prisión preventiva justificada, decretada en contra de los quejosos mediante resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce, toda vez que las partes llegaron a un acuerdo reparatorio, con el cual se decretó el sobreseimiento de la causa penal de que se trata y, por ende, la inmediata y absoluta

libertad de los recurrentes ********** y ********** ambos de apellidos **********; situación que evidentemente ya no les genera agravio alguno, pues se hizo patente la destrucción definitiva e incondicional de todos los efectos del acto reclamado.

Por ende, se actualiza plenamente la causa de improcedencia invocada por este Tribunal Colegiado, por lo que hace al acto reclamado consistente en la resolución –de treinta y uno de enero de dos mil catorce, dictado en la causa penal **********– y, consecuentemente, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto de donde emana el recurso de revisión que ahora se resuelve.

Una vez establecido lo anterior, es conveniente justificar las causas por las que este tribunal constitucional, determinó no otorgar a los recurrente la vista a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo.

El artículo 64 de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

"Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."

De ese precepto legal se colige que son dos supuestos que se deben actualizar para dar vista a las partes:

a) La existencia de un Juez, quien al resolver previamente el juicio de amparo no se haya pronunciado sobre la causa de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio.

b) Que esa causa no hubiera sido planteada por alguna de las partes.

De la interpretación de ese precepto legal, se concluye que es deber del órgano superior (a los Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios), cuando de oficio advierta que se actualiza una causa de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por los inferiores, dar vista por tres días al quejoso para que alegue lo que a su derecho convenga.

Ello con el propósito de otorgarle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia; en aras del derecho de audiencia y en atención al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo.

Sin embargo, en el asunto particular y de forma excepcional, se considera que no es indispensable que previo a actualizar la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria de la materia y el sobreseimiento en términos del diverso numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se mandará dar vista a las partes recurrentes ********** y **********, ambos de apellidos **********.

Lo anterior es así, ya que la causa de improcedencia que se actualiza es la relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, al haberse declarado extinguida la acción penal y, por ende, conforme al artículo 303, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el sobreseimiento en la carpeta administrativa **********, en favor de ********** y **********, ambos de apellidos **********, por el hecho delictuoso de actos libidinosos en agravio de los menores de edad de identidad resguardada de iniciales ********** y **********.

Resolución que es inconcuso tiene rango de cosa juzgada, en términos del artículo 302 del Código Federal de Procedimientos Penales para el Estado de México que establece:

"Artículo 303. El sobreseimiento firme, pone fin al proceso en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho, produce el cese de todas las medidas cautelares que se hubieran dictado y tiene la autoridad de cosa juzgada."

Por consiguiente, esa característica hace que la causa de improcedencia y, por consecuencia, el sobreseimiento en el juicio de amparo sea notorio e indudable, pues se trata de una resolución que pone fin al juicio, porque sin resolver el fondo del asunto, da por finalizada la controversia penal.

De ahí que es indudable que ya no existirá otra oportunidad de abordar el fondo del asunto por el estado procesal de la carpeta administrativa, la cual se dio por concluida y, en consecuencia, no se deja en estado de indefensión al quejoso y no se vulnera su derecho de audiencia.

Sin que con ese proceder se contravenga el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), de título y contenido siguientes:

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.—De la interpretación del citado precepto legal que indica: 'Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga', se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia."[17]

Por el contrario, el supuesto que se actualiza en el asunto particular, constituye también una excepción respecto de la aplicación del mencionado criterio jurisprudencial.

El Alto Tribunal en Pleno determinó necesaria la vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa novedosa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, cuando no ha sido alegada por las partes y la advierta de oficio el juzgador, que tiene como finalidad otorgar oportunidad de defensa en el procedimiento, para que quien insta la acción constitucional exprese los argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con esa probable hipótesis de improceden-

[17] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24.

cia, en aras de velar por el derecho de audiencia y en atención al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo.

Sin embargo, ello no implica que no pueda haber excepciones, pues conforme a las consideraciones que sustentan el criterio en cita es evidente que subsiste esa obligación para las autoridades con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia, para que el quejoso dentro de un juicio de amparo que pretenda declararse improcedente y, por ende, decretarse el sobreseimiento, esté en aptitud de alegar lo que a sus intereses convenga y evidenciar que no se actualiza ninguna hipótesis de improcedencia y con ello favorecer su situación jurídica, siempre que el estado procesal en que se encuentre el asunto conceda la posibilidad de que el fondo del mismo podrá ser analizado en esa u otra oportunidad.

Pero si es evidente e inminente que la situación jurídica del quejoso ya no puede ser mejorada por el estado procesal en que se encuentre el asunto, al no existir oportunidad para abordar el fondo del mismo, resulta innecesaria la vista.

Máxime si las partes tienen conocimiento de la causa que origina la improcedencia, no obstante que éste sea en diversa instancia, como en el asunto particular.

En efecto, los quejosos son sabedores de que se decretó el sobreseimiento en la carpeta administrativa de origen, pues la parte ofendida otorgó el perdón, con lo que se dio por concluido el conflicto, ello al ser la parte reo en el litigio de primera instancia.

Entonces, es redundante hacer saber esa circunstancia a los inconformes cuando es evidente que tienen pleno conocimiento de la existencia del sobreseimiento en el procedimiento de primera instancia, lo que de manera inevitable provoca la improcedencia del amparo, pues son las mismas partes que intervienen en este juicio de amparo.

Por consiguiente, se insiste, la mayoría que integra este Tribunal Colegiado considera que no se contraviene el mencionado criterio jurisprudencial, por el contrario, en el supuesto descrito, además de ser innecesario otorgar a los quejosos la vista a que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo, también constituye una excepción respecto de la aplicación de la mencionada jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico, cuando la causa de improcedencia es inminente e indudable, al haberse decretado la extinción de la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa de donde deriva el acto reclamado.

Sobreseimiento del cual tienen conocimiento los inconformes por haber sido parte en el asunto de origen y de común acuerdo propiciaron la circunstancia que generó la causa de improcedencia en el juicio de amparo, pues es evidente que la resolución correspondiente puso fin al juicio y es inconcuso que ya no habrá ninguna otra etapa procesal en la que se pueda analizar el fondo del asunto.

Bajo esa óptica, no se vulnera el derecho de audiencia de los quejosos, pues es evidente que tienen conocimiento de la causa que origina la improcedencia del amparo y, además, ya no pueden obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, al haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 90, 91, 184 y 188 de la Ley de Amparo, vigente al momento de iniciarse el presente juicio de amparo; ello, por disposición del transitorio tercero del decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se hizo saber a la Nación la expedición de la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ********** y ********** ambos de apellidos **********, contra el acto reclamado a las autoridades responsables que quedaron precisadas en el proemio de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de origen; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en la noticia estadística y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, integrado por los Magistrados: presidente Daniel Horacio Escudero Contreras, Miguel Enrique Sánchez Frías y Jorge Arturo Sánchez Jiménez (ponente); con la disidencia del segundo, mismo que procede a emitir su voto particular.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular del Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías: I. Esbozo del caso.—1. En sesión de quince de enero de dos mil quince, este Tribunal Colegiado resolvió, por mayoría, con voto particular del suscrito, el amparo en revisión **********, en el sentido de revocar y sobreseer la sentencia recurrida.—2. Así, mi voto particular tiene la finalidad de explicar por qué en mi opinión resultaba conveniente jurídicamente, dar vista al quejoso con la causal de improcedencia analizada, en estricto cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, y en acatamiento al criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que formulo este voto, expresando los antecedentes del caso, consideraciones de la ejecutoria y mis razones.—II. Antecedentes.—3. El diez de febrero de dos mil catorce[1], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, ********** y **********, ambos de apellidos **********, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades: • Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en su calidad de autoridad ordenadora. • Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México, como ejecutora.—4. Autoridades de las cuales reclamaron la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce, mediante la cual se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva decretada dentro de la causa penal **********.—5. Seguidos los trámites de ley, el uno de abril de dos mil catorce,[2] se llevó a cabo la audiencia constitucional, en la cual se resolvió negar a los quejosos el amparo y protección de la Justicia de la Unión; siendo este último el acto recurrido.—6. Inconformes con la anterior determinación, mediante ocurso de diecinueve de junio de dos mil catorce,[3] presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, ********** y **********, ambos de apellidos **********, por su propio derecho interpusieron recurso de revisión.—7. De dicho medio de impugnación correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, el cual se registró como R.P. 216/2014; el diecinueve de agosto de dos mil catorce,[4] por escrito los recurrentes desistieron del medio de impugnación de que se trata.—8. El veinte siguiente[5] se les requirió para que ratificaran su desistimiento, apercibidos que, de ser omisos, se continuaría con la tramitación del mismo.—9. El treinta y uno de octubre de dos mil catorce el actuario judicial adscrito a este órgano colegiado, se constituyó en el interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Estado de México, a fin de notificar a los recurrentes el proveído de referencia; allí le informaron que el cinco de septiembre de la anualidad próxima pasada se ordenó la libertad inmediata y absoluta libertad de los buscados, al haberse decretado el sobreseimiento de la causa penal **********, del índice de la responsable.—10. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, el presidente de este Tribunal Colegiado requirió al Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, para que informara sobre el estado procesal de la carpeta **********, así como del cambio de situación jurídica de los recurren-

[1] Fojas 30 a 42 y 45 a 56 del juicio de amparo.
[2] Fojas 263 a 304 del juicio de amparo indirecto.
[3] Fojas 383 a 398 del juicio de amparo indirecto.
[4] Fojas 40 y 41 del cuaderno de amparo.
[5] Fojas 42 y 43 del cuaderno de amparo.

tes.—11. El veintiuno siguiente, el Juez de origen remitió copia certificada del acta mínima de audiencia de cinco de septiembre de que se trata, en la que consta la resolución que declaró el sobreseimiento en la carpeta administrativa.—III. El fallo de este tribunal.—12. La mayoría consideró actualizada la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: … XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; …" Asimismo, el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: … V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. …".—13. Lo anterior, al estimar que el Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, remitió copia certificada de la audiencia de cinco de septiembre de dos mil catorce, en la cual las partes llegaron a un acuerdo reparatorio; así, al tener cumplidas las obligaciones pactadas, se decretó la extinción de la acción penal y, por consiguiente, el sobreseimiento de la carpeta administrativa **********, en favor de los justiciables, por el hecho delictuoso de actos libidinosos en agravio de los menores de edad de identidad resguardada de iniciales ********** y **********.—14. En ese tenor, la mayoría, insistió, la determinación de treinta y uno de enero de dos mil catorce quedó insubsistente con la diversa de cinco de septiembre de la misma anualidad, pues las cosas volvieron a una situación similar a la que guardaba antes de la emisión del acto reclamado, restituyéndose así a los quejosos en el goce del derecho humano que estimaban violado y afectaba su esfera jurídica.—15. La mayoría estimó conveniente justificar las causas por las que se determinó no otorgar a los recurrentes la vista referida en el artículo 64 de la Ley de Amparo, al respecto indicó: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.".—16. De la interpretación de ese precepto legal, concluyó no ser indispensable que previo a actualizar tal causa de improcedencia se mandara dar vista a los recurrentes.—17. Es así, pues la actualizada es la relativa a la cesación de efectos, al haberse declarado extinguida la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa **********, en favor de ********** y **********, ambos de apellidos **********.—18. La mayoría consideró que esa resolución tiene rango de cosa juzgada, en términos del artículo 303 del Código Federal de Procedimientos Penales para el Estado de México. Por lo cual estimó que con ese proceder no se contraviene el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), de título y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."[6].—19. Es así, dijeron, pues no implica que no pueda haber excepciones,

[6] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,* Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24.

ya que conforme a las consideraciones que sustentan ese criterio es evidente que subsiste esa obligación para las autoridades con la finalidad de garantizar el derecho de audiencia, para que el quejoso dentro de un juicio de amparo que pretenda declararse improcedente y, por ende, decretarse el sobreseimiento, esté en aptitud de alegar correspondiente (sic) y evidenciar que no se actualiza ninguna hipótesis de improcedencia y con ello favorecer su situación jurídica.—20. En el caso, la mayoría estimó que se actualizaba la referida excepción, toda vez que las partes llegaron a un acuerdo reparatorio, por el cual se decretó el sobreseimiento en la carpeta administrativa con efectos de cosa juzgada, lo cual dejó sin efectos el acto reclamado consistente en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil catorce; por lo que, sin lugar a dudas, evidencia la actualización de la causal de improcedencia, que de oficio se observó; esto es, fueron los propios quejosos los que dieron lugar a la causa de improcedencia sobrevenida.—IV. Razones del voto particular.—21. Reitero, no comparto la determinación de no dar vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia por la que se revoca y sobresee en el juicio de amparo, pues de la lectura del artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo no se advierte excepción alguna, por la cual proceda dejar de dar vista a la quejosa con la causal de improcedencia.—22. Lo anterior es así, pues de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley de Amparo vigente, en atención a la reforma constitucional de dos mil once, en materia de derechos humanos, resultaba necesario reformar estructuralmente la materia de amparo, transformando la forma en que tradicionalmente se concibe el juicio constitucional, para lograr así su adaptación a las necesidades de la actualidad.—23. Dicho decreto tuvo como propósito primordial ajustar la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales a la recién aprobada reforma constitucional.—24. Así, se comienza por prever la ampliación del objeto de protección del juicio de amparo, a fin de hacerlo armónico con la reforma al artículo 103 constitucional, estableciendo claramente que el juicio de amparo será procedente para la protección de los derechos instituidos en los tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano.—25. Razón por la cual el juicio de amparo es un medio procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano que tiene por objeto específico hacer reales, eficaces y prácticos los derechos humanos establecidos en la Constitución.—26. Asimismo, se plantea una reforma integral al juicio de amparo derivado de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011.—27. Por lo anterior, es de considerarse que el artículo en cuestión incorporó una hipótesis no contemplada en la ley reglamentaria anterior, esto es, dar oportunidad al impetrante de amparo para formular argumentos relativos a la no actualización de la causal de improcedencia advertida de oficio por el órgano jurisdiccional.—28. De ahí que la exposición de motivos de la nueva Ley de Amparo revistió importancia para el Estado de Derecho, pues amplió el abanico de protección constitucional que representa el juicio constitucional al ser el protector y garante de la Carta Magna –principio proteccionista que lo rige–. 29. Es decir, dicho ordenamiento se caracteriza por cobijar y resguardar, en un principio, garantías individuales, pero con la reforma de mérito amplió su campo de protección para incluir a los derechos humanos.—30. Por lo que, la defensa de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, se concreta en la Ley de Amparo vigente, entre otros ordenamientos, al tenor de la cual se limita el poder de la autoridad; así, el control constitucional hace específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el respeto a

las prerrogativas señaladas por el Constituyente, y uno de los mecanismos para lograr su prevalencia en el Estado Mexicano es el juicio de amparo.—31. Lo cual cobra sentido, en la medida en que se ha reconfigurado el sistema nacional de protección y defensa a los derechos fundamentales, pues a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, se ha ampliado el régimen de derechos previstos en la Ley de Amparo, que contiene un verdadero sistema proteccionista para el gobernado vinculado principalmente a la defensa de los derechos humanos.—32. De ahí la necesidad de tener presente que la procedencia del juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, es cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, sin que se autorice a los particulares o al Juez su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto que las normas son obligatorias para todos los sujetos del proceso.—33. En ese sentido, cabe señalar que la actualización de alguna causal de improcedencia implica la extinción de la posibilidad de proseguir el juicio constitucional, por ende, para examinar la legalidad del acto reclamado.—34. De ahí que la improcedencia del juicio de amparo es una de las instituciones jurídicas de mayor trascendencia en este tipo de juicios, pues implica, en términos generales, la falta de oportunidad, de fundamento y de derecho, según sea el caso, para su tramitación, prosecución y resolución de fondo del reclamo constitucional o convencional planteado.—35. Así, con apoyo en el principio de audiencia y en el sistema proteccionista ampliado de la ley de la materia, debe adicionarse a lo anterior que el párrafo segundo del artículo 64, (sic) debe extenderse tal protección y estimarse que lo anterior también aplica en el amparo uniinstancial; esto es, que si en el trámite del amparo directo se estima que se actualiza alguna causa de improcedencia, igualmente debe darse vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga.—36. De lo anteriormente sentado, se estima que cuando el órgano jurisdiccional, tratándose del amparo directo o del recurso de revisión en amparo directo o indirecto, según sea el caso, advierta de oficio que se actualiza alguna causa de improcedencia, tendrá que dar vista al quejoso o al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; lo que en el segundo párrafo del artículo 64 de la ley en estudio se ordena al órgano jurisdiccional con la expresión "dará", lo que significa que son imperativos para el juzgador, por lo que queda fuera de su potestad observarlos o no, esto es, debe cumplirlos estrictamente.—37. Todo lo cual, evidentemente, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en eso los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo.—38. Así, del señalado precepto se desprende que cuando el órgano jurisdiccional de amparo advierta una causal de improcedencia, deberá dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su interés convenga, siempre que se cumplan con los dos requisitos siguientes: a) Que tal causal no haya sido alegada por las partes; y, b) Que no hubiese sido analizada por el órgano jurisdiccional inferior.—39. En el presente fue sobrevenida la causal prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, ello toda vez que las partes llegaron a un acuerdo reparatorio, por lo que se decretó el sobreseimiento de la carpeta administrativa.—40. De ahí que, para que se actualice el supuesto normativo de que se trata deben presentarse ambas hipótesis previstas en el párrafo en cuestión y surja la

obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; ello en aras de proteger adecuadamente su esfera de derechos.—41. Obligación que está dirigida tanto a la tramitación del juicio de amparo directo a que alude el numeral 2o., párrafo primero, de la ley de la materia vigente, así como al recurso de revisión tratándose del amparo directo e indirecto cuyo conocimiento sea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracciones VIII, inciso b) y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—42. Lo anterior, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 51/2014 (10a.), con registro digital 2007920, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.".—43. Lo anterior, tomando en consideración que en primera instancia no existe órgano inferior, dado que en esa categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio.—44. En esta medida, los Tribunales Colegiados, tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo, tendrán el carácter de superior; cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada.—45. En este orden de ideas, la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, multicitado, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2o., párrafo primero, de la ley de la materia, cuyo conocimiento, en grado de ad quem, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—46. Por lo que considero que la disposición normativa analizada busca que se respete el principio de audiencia hasta el último momento procesal, mediante la vista que se otorgue al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga ante la posible actualización de oficio de alguna causa de improcedencia.—47. Lo cual implica que, con apoyo en el principio de audiencia y en el sistema proteccionista ampliado de la ley de la materia, debe adicionarse a lo anterior que el párrafo segundo del artículo 64, extenderse tal protección (sic) y estimarse que lo anterior también aplica en el amparo uniinstancial; esto es, que si en el trámite del amparo directo se aprecia que se actualiza alguna causa de improcedencia, igualmente debe darse vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga.—48. De modo que la disposición normativa que se analiza busca que se respete el principio de audiencia hasta el último momento procesal (amparo directo y recurso de revisión en amparo indirecto y directo).—49. Pues de no ser así, dicha parte quedaría en estado de indefensión al privársele de la oportunidad de expresar los argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con ese nuevo contexto, pues no podría exponerlos más adelante, precisamente, porque el juicio uniinstancial y su recurso de revisión, como en el caso,

son el último momento, dado que se instaura como la última oportunidad procesal para el quejoso de controvertir algún aspecto novedoso, aun cuando la causal de improcedencia es relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, pues aun en ese supuesto no se le puede vedar al quejoso la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga y el Tribunal Colegiado tendrá la obligación de pronunciarse al respecto, sin enderezar la decisión de la mayoría prejuzgando que éste nada tendría que reclamar.—50. De modo que, en el caso, no se advierte que el precepto legal analizado prevea alguna excepción a la obligación de dar vista al quejoso con la causal de improcedencia de que se trata, pues si bien, la misma surge en virtud del acuerdo reparatorio, por el cual se decretó el sobreseimiento en la carpeta administrativa con efectos de cosa juzgada, lo que dejó sin efectos el acto reclamado y como consecuencia de ello la actualización de tal causal, no menos cierto resulta que ello signifique que los quejosos estén conformes con los hechos que se les imputan, o que conocieran la consecuencia de tal actuar en el juicio de amparo, esto es, el sobreseimiento del juicio por haber sobrevenido la referida causal de improcedencia.—52. De ahí que se estime necesario dar vista a éstos para que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que se apreció procedente, para que, de considerarlo procedente, expongan lo que a su interés convenga.—V. Conclusiones.—53. A. Para que se actualice el supuesto normativo, plasmado en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, deben actualizarse los siguientes requisitos: a) Que tal causal no haya sido alegada por las partes; y, b) Que no hubiese sido analizada por el órgano jurisdiccional inferior.—54. B. De la lectura de dicho precepto legal no se advierte excepción alguna por la cual proceda dejar de dar vista a la quejosa con la causal de improcedencia.—55. C. No debe soslayarse la existencia y consecuente obligatoriedad del criterio definido del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."[7].—56. Lo anterior ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se

[7] Décima Época, Registro digital 2007920, Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 51/2014 (10a.), página: 24. "Texto: De la interpretación del citado precepto legal que indica: Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respec-

determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federa-*

---

tiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia.

"Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

ción del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

II.1o.18 P (10a.)

Amparo en revisión 216/2014. 15 de enero de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Miguel Enrique Sánchez Frías. Ponente: Jorge Arturo Sánchez Jiménez. Secretaria: Carmen Yadira Reyes Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DETERMINAR Y

CALIFICAR EN DEFINITIVA UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Si el quejoso acude ante el Juez de Distrito con jurisdicción en determinado lugar y reclama que el Ministerio Público ante el cual denunció un delito se ha abstenido de determinar y calificar en definitiva la averiguación previa, la competencia para conocer del amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción haya presentado la demanda. Es así, toda vez que la abstención del Ministerio Público de determinar una averiguación previa y emitir pronunciamiento respecto de la acción penal, es un acto negativo que, per se, no trae consigo algún efecto distinto a la citada inhibición ni tampoco requiere ejecución material alguna, pues al rehusarse a resolver la indagatoria, dicha representación social adopta una conducta omisiva. De ahí que el conflicto competencial se resuelve con la regla establecida en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone que cuando el acto reclamado no requiera ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.23 P (10a.)

Conflicto competencial 2/2015. Suscitado entre los Juzgados Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 17/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 6, Tomo I, mayo de 2014, página 500, de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS APLICADOS AL QUEJOSO EN

UNA SENTENCIA DE NULIDAD PREVIA A LA RECLAMADA, DICTADA ÉSTA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, AL NO HABER CONTROVERTIDO PREVIAMENTE ESE ASPECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Si contra una sentencia de nulidad se interpuso el juicio de amparo, en el que se hicieron valer conceptos de violación para cuestionar la constitucionalidad de los preceptos aplicados, los cuales no fueron analizados en la ejecutoria por estimarse preferente el estudio de otros de legalidad que se consideraron fundados y, en cumplimiento, se dictó una segunda que resultó favorable al actor, porque se declaró la nulidad, pero con motivo del recurso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad se revocó, dictándose una tercera resolución por la responsable, y contra ésta se interpuso amparo directo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversos preceptos aplicados también en las sentencias previas, los conceptos de violación relativos deben declararse inoperantes, porque el quejoso debió hacer valer esa inconstitucionalidad con motivo de la emisión de la segunda sentencia dictada en cumplimiento al amparo inicial, al encontrarse en el supuesto de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, toda vez que se trataba de una determinación jurisdiccional que le era favorable, en la que se le aplicaron dichos preceptos y su contraparte interpuso el recurso de revisión fiscal; de ahí que, al no haberlo hecho, consintió la aplicación de la norma y, en consecuencia, no puede controvertirla posteriormente. Sin que con este criterio se soslaye la existencia de las tesis 2a. LXXV/2014 (10a.), 2a. LXXVI/2014 (10a.) y 2a. LXXVII/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se estimó inconstitucional dicha fracción II, porque de acuerdo con las razones sostenidas por este tribunal en la diversa tesis IV.2o.A.80 K (10a.), esa porción normativa aún está vigente, ya que la votación de aquéllas no fue idónea para establecer jurisprudencia por reiteración.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.82 K (10a.)

Amparo directo 301/2014. Lizzeth Zablah María. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez.

Nota: Las tesis aisladas 2a. LXXV/2014 (10a.), 2a. LXXVI/2014 (10a.) y 2a. LXXVII/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, páginas 398, 400 y 397, con los títulos y subtítulos: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL LIMITAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO A DICHO JUICIO CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.", "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PRODUCIR

INCERTIDUMBRE JURÍDICA." y "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL IMPEDIR INJUSTIFICADAMENTE PLANTEAR EN DICHO JUICIO PROMOVIDO CONTRA SENTENCIAS FAVORABLES PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES APLICADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO AL RESOLVER LA REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 104 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN.", respectivamente. La diversa IV.2o.A.80 K (10a.) citada, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SÓLO CUANDO SE ADUZCAN CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, SINO TAMBIÉN DE LEGALIDAD, CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA.", se encuentra pendiente de publicación.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD. Si bien es cierto que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, generó nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano y, particularmente, para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, y dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional *ex officio*, también lo es que, según interpretaron la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.), por una parte, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que deba ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental

restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. Consecuentemente, si en el amparo directo los conceptos de violación, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de la sentencia reclamada, se limitan a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplen con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, son inoperantes, más aún, ante el imperio de la regla general de estricto derecho, como previsión constitucional encaminada a asegurar, en condiciones ordinarias en el procedimiento de amparo, la imparcialidad del órgano de control y la igualdad de trato hacia las partes, cuando no concurre un motivo que excepcionalmente permita suplir la deficiencia de la queja en los términos establecidos en la Ley de Amparo y tampoco se advierte sospecha de disconformidad constitucional o convencional de una norma aplicada en perjuicio del quejoso; en el entendido de que si lo que se hace valer es la omisión de la responsable de ejercer el control referido, ello no constituye, en sí mismo, una violación pues, en todo caso, el justiciable estuvo en aptitud de efectuar el planteamiento respectivo ante la jurisdicción constitucional, cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos, sin que lo hubiese hecho.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.83 K (10a.)

Amparo directo 382/2014. Joel Nava Saucedo. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Nota: Las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 (10a.) y 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.) y 2a./J. 123/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* de los viernes 21 de febrero a las 10:32 horas, 3 de octubre a las 9:30 horas, 23 de mayo a las 10:06 horas y 28 de noviembre a las 10:05 horas, todos de 2014, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, página 639; Libro 11, Tomo I, octubre de 2014, página 613; Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 772 y Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 859, con los títulos y subtítulos: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO*. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.", "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN,

DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." y "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la *causa petendi*, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002(*) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir de ninguna manera implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende,

(*) Publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO."

debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
(V Región)2o.1 K (10a.)

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 407/2014 (cuaderno auxiliar 920/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Amaury Cárdenas Espinoza.

Amparo directo 723/2014 (cuaderno auxiliar 866/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Cata Electrodomésticos, S. L. 13 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Amaury Cárdenas Espinoza.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONCURSO MERCANTIL. LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN RELATIVA DEBE ACOMPAÑARSE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO ANTE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA). La fracción I del artículo 20 de la Ley de Concursos Mercantiles dispone que la solicitud de declaración de concurso mercantil deberá acompañarse de los estados financieros del comerciante, de los últimos tres años, los cuales deberán estar auditados cuando exista la obligación en términos de ley. De la interpretación a dicho precepto se advierte que los estados financieros que presente el comerciante anexos a su solicitud deberán reunir dos requisitos: 1. Que la persona que deba elaborar los estados financieros de la sociedad mercantil tenga conocimientos en

contabilidad y, por ende, cuente con la profesión de contador público, ya sea independiente o de un despacho auditor; y, 2. Que los estados financieros estén firmados por el contador público que los elaboró para dar certeza y seguridad de la información en ellos contenida. En este sentido, como dichos documentos tienen trascendencia y repercusiones legales, deberán contar con el elemento formal de estar suscritos por un contador público registrado ante las autoridades hacendarias, quien debe tener el título profesional correspondiente, reconocido por la Secretaría de Educación Pública y tener la certificación expedida por un colegio o asociación de contadores públicos autorizados para tal efecto.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.180 C (10a.)

Amparo directo 397/2014. Constructora Metropolitana Comet, S.A. de C.V. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Valery Palma Campos.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

CONCURSO MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES LA SOLICITUD DE SU DECLARACIÓN, DEBE ACOMPAÑARSE DE UN DOCUMENTO PÚBLICO DONDE CONSTE LA MANIFESTACIÓN DE LOS SOCIOS PARA DECLARARSE EN MORA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VII, DE LA LEY RELATIVA). Del artículo 20, fracción VII, de la Ley de Concursos Mercantiles, se advierte que tratándose de personas morales, deben acompañarse a la solicitud de declaración de concurso mercantil los acuerdos corporativos que sean necesarios para solicitarlo, de conformidad con los términos y condiciones establecidos por los estatutos sociales respectivos o por los órganos sociales competentes, los cuales deberán evidenciar de manera indubitable la intención de los socios o accionistas, en tal sentido; este requisito se satisface con el documento público correspondiente en donde quede claramente asentada la intención de los socios para declararse en mora, de conformidad con el previo acuerdo conjunto de éstos que integre su voluntad y los motivos para solicitar dicho concurso.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.179 C (10a.)

Amparo directo 397/2014. Constructora Metropolitana Comet, S.A. de C.V. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Valery Palma Campos.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO DECLINA SU COMPETENCIA EN FAVOR DEL JUZGADO "EN TURNO" EN UN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, Y LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE ESE LUGAR SE NIEGA A RECIBIR EL OFICIO CORRESPONDIENTE, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE ESTÁ IMPOSIBILITADA LEGALMENTE PARA HACERLO. De la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.", de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 46, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, se advierte que para plantear un conflicto competencial es menester que los órganos judiciales contendientes manifiesten expresamente, en ejercicio de su autonomía y potestad, que no aceptan conocer del asunto sometido a su jurisdicción. Ahora bien, cuando un Juez de Distrito declina su competencia en favor del juzgado que se encuentre "en turno" en un determinado circuito judicial, y el jefe de la Oficina de Correspondencia Común de ese lugar se niega a recibir el oficio correspondiente, bajo el argumento de que está imposibilitado legalmente para hacerlo, ello no puede estimarse como un pronunciamiento válido para que pueda existir un conflicto competencial, ya que no hay una manifestación expresa de alguna autoridad jurisdiccional en el sentido de que no acepta conocer de la causa sometida a su jurisdicción, sino la declaración de un funcionario administrativo carente de facultades para determinar o pronunciarse sobre cuestiones legales; máxime que la declaratoria de incompetencia ni siquiera fue recibida por el juzgador al que pretendía remitirse, ni éste manifestó que la rechazaba.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.P.4 K (10a.)

Conflicto competencial 7/2014. Suscitado entre el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Puebla y el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Nérida Xanat Melchor Cruz.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE SI UN JUZGADO DE DISTRITO LO PLANTEA ENTRE ÉL Y EL QUE SE ENCUENTRE "EN TURNO" EN UN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SIN QUE SE ADVIERTA PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL EN ESPECÍFICO, EN EL SENTIDO DE QUE NO ACEPTA CONOCER DEL ASUNTO SOMETIDO A SU JURISDICCIÓN. De la

jurisprudencia 1a./J. 30/2003, de rubro: "CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.", de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 46, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, se colige que para plantear un conflicto competencial, es menester que los órganos contendientes manifiesten expresamente, en ejercicio de su autonomía y potestad, que no aceptan conocer del asunto sometido a su jurisdicción; por tanto, si un Juzgado de Distrito propone al Tribunal Colegiado de Circuito un conflicto competencial entre él y el que se encuentre "en turno" en un determinado circuito judicial, sin que se advierta pronunciamiento expreso de un órgano jurisdiccional en específico, en el sentido de que no acepta conocer del expediente puesto a su consideración, es inconcuso que no existe el conflicto competencial planteado, pues no existe certeza respecto de cuál de los Jueces del lugar es quien puede determinar que carece de competencia para recibir la causa; además de que no existe consideración expresa en contrario, emitida por alguna autoridad judicial en concreto, en la que concluya que carece de competencia para conocer del asunto sometido a su potestad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.P.5 K (10a.)

Conflicto competencial 7/2014. Suscitado entre el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Puebla y el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, en turno. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Nérida Xanat Melchor Cruz.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONSTANCIAS REMITIDAS CON EL INFORME JUSTIFICADO. NO PUEDE NEGARSE AL QUEJOSO IMPONERSE DE ÉSTAS, AUN CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) LAS HAYA ESTIMADO COMO RESERVADAS, SI PUEDE ELABORAR UNA VERSIÓN DE AQUÉLLAS PARA PONERSE A LA VISTA DE LAS PARTES, Y SIN VIOLAR EL SIGILO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA –DE DONDE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO–, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Si el juicio de amparo indirecto es un procedimiento de impugnación autónomo donde se reclaman actos de autoridad, es claro que en él, éstos están sometidos al análisis de su constitucionalidad en equilibrio y contradicción al derecho de los quejosos para debatir este aspecto en cuanto a lo que a éstos perjudique. Por tanto, la autoridad responsable no puede condicionar el cumplimiento de sus

obligaciones, derivadas del propio juicio constitucional, ni la actuación de la autoridad de amparo, para complementar o compensar sus actos. Ahora bien, tratándose de las constancias que son remitidas por el Ministerio Público (autoridad responsable) junto con su informe justificado, en asuntos relacionados con la secrecía o sigilo de la averiguación previa, es responsabilidad de ésta –y no de los Jueces de amparo– buscar los métodos que le permitan enviarlas sin violar los derechos de quienes acceden al juicio constitucional en contra de lo que individualmente les afecta; por ende, en estos casos, la integración de las constancias debiera hacerse de forma tal que, cumpliendo con la ley, se tenga contemplado que las actuaciones remitidas al juicio de amparo, no pueden estar ya sujetas al criterio de sigilo de la autoridad responsable, pues si obran en el juicio de amparo no deben ser ajenas ni ocultarse al quejoso; de ahí que, si el Ministerio Público estima que ciertas actuaciones de la averiguación previa –de donde derivó el acto reclamado– son consideradas como reservadas, para no violentar el secreto y confidencialidad que en aquéllas ha de imperar, debe adjuntar a su informe una versión que pueda ser consultable, y así el Juez de Distrito, estar en posibilidad de ponerlas a la vista de las partes, pues si bien no se trata de que a través del amparo se tenga acercamiento a cuestiones ajenas al quejoso, lo cierto es que no puede negársele el acceso a las constancias remitidas como justificación del acto reclamado, ya que sólo así se respetan su derecho y la posibilidad plena de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad de dicho acto; de lo contrario, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento que amerita su reposición, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.2o.P.14 K (10a.)

Amparo en revisión 142/2014. 6 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre P. Jardón Orihuela.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la diversa I.1o.A.E.1 K (10a.), de título y subtítulo: "INFORMACIÓN RESERVADA. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE OBSERVE QUE LA REMITIDA CON ESA CLASIFICACIÓN COMPRENDE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE DESCONOCE EL QUEJOSO, DEBE PERMITÍRSELE EL ACCESO A LA QUE SEA NECESARIA, A FIN DE QUE PUEDA HACER VALER LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS CONVENGAN.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo II, abril de 2014, página 1525, que es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 121/2014, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA USO COMERCIAL. LAS PARTES PUEDEN ESTABLECER A QUIÉN CORRESPONDERÁ OBTENER LA LICENCIA DE USO DE SUELO, CUANDO LA LOCALIDAD ARRENDADA SE DESTINA A UN GIRO COMERCIAL DISTINTO AL PREVISTO EN AQUÉLLA. De conformidad con el artículo 1839 del Código Civil para el Distrito Federal, en los contratos se tendrán por puestas, aunque no se expresen, las cláusulas que se refieran a los requisitos esenciales del contrato o sean una consecuencia necesaria de su naturaleza ordinaria; y, en términos del diverso numeral 2412, fracción I, del propio ordenamiento, es obligación del arrendador entregar al arrendatario el bien inmueble en estado de servir para el uso convenido y para aquel en que por su misma naturaleza estuviere destinado; entonces, cuando el local arrendado se otorga para un giro comercial específico, se entiende que éste se encuentra previsto dentro de los usos comerciales autorizados por la licencia de uso de suelo, pues sólo así, el arrendador cumple con su obligación de entregarlo en condiciones de servir; pero cuando el local arrendado se vaya a utilizar para un giro comercial distinto de aquél, las partes pueden convenir a quién corresponderá obtener la licencia de uso de suelo respectiva; pues de esa manera se mantiene vigente el principio de que la voluntad de aquéllas es la que rige el contrato.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.165 C (10a.)

Amparo directo 167/2014. Marela del Castillo Navarro y otra. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Adolfo Almazán Lara.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONTRATO DE FIDEICOMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO. Conforme a los artículos 381, 382, 384, 385, 386, 389 y 391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo puede ser fideicomitente la persona física y jurídica colectiva que pueda afectar directamente los bienes que se transfieran al fideicomiso, debido a la transmisión de la propiedad que conlleva dicho acto jurídico. Así, cuando el fideicomitente aporta un bien cuyo derecho de propiedad adquirió por virtud de una resolución judicial y ésta queda sin efectos con motivo de la concesión del amparo solicitado por un tercero extraño, el fideicomiso se ve afectado de nulidad absoluta, pues le sobreviene

un vicio no convalidable, como es la falta de propiedad del fideicomitente; por lo cual, los efectos que éste haya producido se destruyen retroactivamente, en términos del artículo 2226 del Código Civil para el Distrito Federal, por haberse constituido en contravención a la prohibición establecida en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al no cumplir con el único requisito exigido para tener el carácter de fideicomitente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.157 C (10a.)

Amparo directo 606/2013. Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Adolfo Almazán Lara.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. LA FALTA DE FIRMA COMO SIGNO NECESARIO DE LA EXPRESIÓN DE VOLUNTAD DE QUIEN DEBE OBLIGARSE AL PAGO, NO PUEDE SUBSANARSE CON PRUEBAS INDIRECTAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur regula el procedimiento de contratación a través de licitación en sus artículos 49, 50, 51, 52 y 53, y de ellos se advierte que la voluntad de la administración pública requiere de determinada forma escrita para obligarse y no puede ser de manera verbal, por lo que tampoco puede ser verbal la voluntad para reconocer una deuda derivada de un contrato de obra pública para la adquisición de bienes y servicios, a cargo de la entidad federativa. Por tanto, la falta de la firma como signo necesario de la expresión de voluntad de quien debió obligarse al pago, no puede subsanarse con pruebas indirectas (como la testimonial o reconocimiento de firma); porque tratándose de una entidad como lo es el Estado de Baja California Sur, debe estarse al texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública local que otorga a la Secretaría de Finanzas la facultad para hacer pagos a los acreedores de ese Estado y, por tanto, era la indicada para firmar el reconocimiento de adeudo. Luego, por tratarse de una entidad federativa, cualquier insumo, servicio, material o contratación que requiriera para el cumplimiento del objeto de algún programa debe estar adquirido al amparo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, que necesita de las formalidades para disponer de los recursos económicos de dicho Estado los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.177 C (10a.)

Amparo directo 150/2014. Gobierno del Estado de Baja California Sur. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Valery Palma Campos.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COPROPIEDAD. NO EXISTE SI EL MATRIMONIO SE CELEBRA BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004). De los artículos citados, se advierte que el régimen patrimonial del matrimonio era siempre el de separación de bienes, es decir, cada parte conservaba la propiedad y administración de los bienes que respectivamente tenían al celebrar dicho acto y los obtenidos después del matrimonio, los cuales eran del exclusivo dominio de quien los adquiría. Asimismo, en cuanto a los bienes que los cónyuges obtuvieren en común por herencia, legado, donación o por cualquier otro título oneroso o gratuito, serían administrados por ambos, rigiendo las leyes de la copropiedad. De lo que se advierte que la legislación otorgaba a los consortes la posibilidad de adquirir bienes en común, mediante actos jurídicos en los que ambos aparecieran como propietarios, los cuales debían regirse bajo el esquema de copropiedad; de ahí que para que existiera dicha figura, tenían la posibilidad de celebrar contratos de sociedad, asociación o copropiedad previa autorización judicial. De acuerdo con lo anterior, no hay copropiedad si el matrimonio se celebra bajo el régimen de separación de bienes, ya que los adquiridos por cada uno de los consortes permanecen como de su exclusivo dominio y sólo en el caso de que hubieren obtenido un bien en común, podría asistirle a la otra parte, algún derecho sobre éste, lo cual también podría ocurrir si hubieren constituido alguna sociedad o asociación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.155 C (10a.)

Amparo en revisión 355/2013. María de Lourdes González Romero. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COSA JUZGADA. NO OPERA TRATÁNDOSE DEL DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA NUEVAMENTE CONTRA UNA SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN DICTADA ANTES DEL 3 DE ABRIL DE 2013, CUANDO AQUÉLLA PREVIAMENTE SE DESECHÓ POR CONSIDERARSE QUE EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA NUEVA LEY DE LA MATERIA PRECLUYÓ CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA, NO OBSTANTE QUE LA PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 39/2014 (10a.), SE LLEVARA A CABO POSTERIORMENTE. El Pleno del Más Alto Tribunal del País estableció en la jurisprudencia P./J. 39/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 11, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DE TRES DEL ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y SI LOS SUPUESTOS QUE DAN INICIO A SU CÓMPUTO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 18 DE ESE ORDENAMIENTO ACONTECIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, EL REFERIDO PLAZO INICIA A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.", que el plazo para promover el juicio de amparo directo contra las sentencias condenatorias dictadas antes del 3 de abril de 2013, comienza a partir de ese día. De esta forma, pese a que este criterio fuera publicado con posterioridad al desechamiento de una demanda de amparo directo, por considerar que de acuerdo con la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo hasta de ocho años había precluido con anticipación al mencionado 3 de abril, debe tenerse presente que el último párrafo de su artículo 217 refiere que en ningún caso la jurisprudencia tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que a contrario sentido permite interpretar que sí es posible darle ese efecto en su beneficio. De ahí que, ante una nueva demanda de amparo contra la misma sentencia condenatoria, no puede operar la cosa juzgada en función del acuerdo anterior que desechó la primera, ya que se está ante un caso "similar" al que trata la jurisprudencia 2a./J. 8/2005, de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 313, de rubro: "COSA JUZGADA. NO EXISTE RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN QUE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UNA COMUNIDAD AGRARIA, CUANDO EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA SE FUNDÓ EN EL HECHO DE NO HABERSE AGOTADO EL RECURSO DE REVISIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN I, DE LA LEY AGRARIA, SI TAL CRITERIO FUE SUPERADO POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", pues, por un lado, la Ley de Amparo abrogada, en cuanto se refería a la materia penal, señalaba que los sentenciados podían presentar la demanda en cualquier tiempo y, por otro, al fundarse la cosa juzgada en un acuerdo de desechamiento de la demanda firmado por el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, no decidió sobre la constitucionalidad del acto reclamado; máxime si de acuerdo con la jurisprudencia posterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo de ocho años para presentar la demanda, opera a partir del 3 de abril de 2013, por lo que está superado cualquier argumento que vaya contra esa oportunidad en la promoción de la demanda.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.P.7 K (10a.)

Recurso de reclamación 18/2014. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mejía Ponce de León. Secretaria: Liliana Alejandrina Martínez Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos,

para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En este sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de cosa juzgada y cosa juzgada refleja, ya que al igual que la de falta de personalidad constituyen excepciones procesales que deben resolverse de modo incidental, de acuerdo con los artículos 1122, 1129 y 1131 del Código de Comercio y la única consecuencia jurídica de que dichas excepciones sean desestimadas es que se continúe con la tramitación del procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.183 C (10a.)

Queja 17/2014. Juan Carlos Juárez Martínez. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 324/2014, que es objeto de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 412/2014 y 3/2015, pendientes de resolverse por la Primera Sala.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

COSTAS EN JUICIOS DE DIVISIÓN DE COPROPIEDAD. SU CUANTIFICACIÓN DEBE ATENDER SÓLO AL VALOR DE LA PARTE ALÍCUOTA DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE EXCLUIR DE LO INDIVISO Y NO SOBRE SU TOTALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

De conformidad con los artículos 104 y 107 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la cuantificación de las costas debe realizarse, por regla general, atendiendo al valor o suerte principal del juicio y no podrán exceder del veinte por ciento de él; por tanto, si lo que se reclama en un determinado procedimiento es la división de copropiedad, ello implica que las costas deben ser cuantificadas sólo en función del valor de la parte alícuota del inmueble que se pretende excluir de lo indiviso, y no sobre la totalidad del bien raíz relativo, toda vez que esa porción es la única que constituye el objeto medular del juicio y, por ende, la que determina su importe, ponderando que la acción ejercida no tiende a la defensa total del inmueble ni

a la constitución de derechos sobre su integridad, sino que únicamente estriba en dilucidar las desavenencias entre los cotitulares, a fin de desligar la porción que corresponde a la parte actora del bien indiviso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.1o.C.21 C (10a.)

Amparo en revisión 319/2014. María de Lourdes Borja Torreblanca y otra. 12 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Andrés Alberto Cobos Zamudio.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CRÉDITO PREFERENTE EN MATERIA LABORAL. TIENE ESE CARÁCTER EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS. Conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán preferencia sobre cualquier otro crédito en los casos de concurso o quiebra, los que tengan a su favor los trabajadores, derivados del pago de salario o sueldos devengados en el último año, así como por las indemnizaciones. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/98, definió que los "salarios devengados en el último año", incluyen tanto los que el trabajador tiene derecho a percibir en retribución por su trabajo, como los caídos o vencidos que se le adeuden dentro de ese periodo. En este sentido, la retribución que percibe el obrero como pago de las horas extras laboradas, debe considerarse como un crédito preferente, pues su otorgamiento se ajusta a la definición de salario prevista en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, al derivar del trabajo prestado, sin que importe para ello la jornada en que fue realizado; máxime que, atendiendo a la función social del salario, ninguna razón existe para que no le sea sufragada al obrero la labor extraordinaria que no le fue pagada.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
(V Región)5o.22 L (10a.)

Amparo directo 1294/2014 (cuaderno auxiliar 50/2015) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. Melchor Acosta Núñez. 9 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Rodríguez. Secretario: Israel Cordero Álvarez.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 70/98 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 437.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CRÉDITOS PREFERENTES EN MATERIA LABORAL. LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAS VACACIONES NO TIENEN ESE CARÁCTER. Conforme al artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán preferencia sobre cualquier otro crédito en los casos de concurso o quiebra, los que tengan a su favor los trabajadores, derivados del pago de salario o sueldos devengados en el último año, así como por las indemnizaciones. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/98, definió que los "salarios devengados en el último año", incluyen tanto los que el trabajador tiene derecho a percibir en retribución por su trabajo, como los caídos o vencidos que se le adeuden dentro de ese periodo; mientras que la palabra "indemnizaciones" engloba todas aquellas que con tal denominación se establezcan en la Carta Magna, la Ley Federal del Trabajo o los contratos colectivos e individuales de trabajo. Bajo ese tenor, la "prima de antigüedad" prevista en el numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo, no debe considerarse como un crédito preferente, pues se trata de una recompensa por la continuidad en el empleo desempeñado en el pasado; tampoco puede incluirse en el concepto de salario devengado, dado que se entrega por una sola vez al trabajador al término de la relación laboral. Por otra parte, la prestación denominada "vacaciones" tampoco goza de la preferencia crediticia de mérito, en virtud de que su otorgamiento únicamente obedece a la necesidad de que el empleado recupere las energías perdidas en beneficio de la empresa, de manera que, por su naturaleza, no puede equipararse al salario, ni se trata de una indemnización.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
(V Región)5o.21 L (10a.)

Amparo directo 1294/2014 (cuaderno auxiliar 50/2015) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. Melchor Acosta Núñez. 9 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Rodríguez. Secretario: Israel Cordero Álvarez.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria de la contradicción de tesis 70/98 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 437.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el S*emanario Judicial de la Federación*.

CULPABILIDAD. LA PONDERACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SENTENCIADO PARA DISTINGUIR "EL BIEN DEL MAL" COMO UN ASPECTO

PARA DETERMINAR SU GRADO, ES UNA PRÁCTICA CONTRARIA AL PARADIGMA DEL DERECHO PENAL DE ACTO. Si la autoridad judicial incrementa el grado de culpabilidad del sentenciado argumentando que por su edad, tenía la capacidad de distinguir "el bien del mal", tal conclusión contraviene el paradigma del derecho penal de acto por el que se ha decantado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si la autonomía de la persona se encuentra protegida bajo el concepto de dignidad humana a que se refiere su artículo 1o., respetándose la libertad de conciencia y el pensamiento del individuo, no es factible avalar una postura que introduce como parámetro en aquella labor la ponderación de un rasgo del pensamiento del individuo que se hace depender de si puede o no distinguir ciertos conceptos abstractos, en tanto que el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, sino que está limitado a juzgar actos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.P.24 P (10a.)

Amparo directo 110/2014. 24 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mejía Ponce de León. Secretario: Francisco Marroquín Arredondo.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

D

DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. EL MECANISMO PARA DETERMINAR EL MONTO QUE LOS GARANTICE, DEBE CONSIDERAR LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE VEINTIOCHO DÍAS, QUE EQUIVALE A UN MES; LA CUANTÍA DEL NEGOCIO Y EL TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 110/2013 (10a.)].

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 110/2013 (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 349, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. PARA CUANTIFICAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN CUANDO SE RECLAME UNA CONDENA ESTIMABLE EN DINERO DEBE APLICARSE, POR UNA SOLA VEZ, LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE).", precisó que para determinar el monto de los daños y perjuicios generados por el otorgamiento de la medida suspensional en un juicio de amparo indirecto, debe recurrirse a la tasa de interés interbancaria de equilibrio de veintiocho días publicada en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, no indicó si dicho factor económico debía considerarse mensual o anualmente. De manera que, si este elemento constituye la base para el cálculo de los daños y perjuicios que se pudieran causar con la medida suspensional, ello requiere que su cálculo se fije de forma mensual, porque la jurisprudencia remite al TIIE a veintiocho días; además, no debe perderse de vista que el factor económico en cuestión, integra tanto el valor del dinero, como el rendimiento que éste puede generar. En consecuencia, a fin de establecer el monto de la caución, debe considerarse lo siguiente: a). La cuantía del negocio; b). La tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a un plazo de veintiocho días (publicada por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación), que se encontraba vigente al día de la resolución suspensional; c). El tiempo probable de la duración del juicio. Una vez establecidos los

elementos anteriores, el mecanismo para determinar el monto de la caución debe ser el siguiente: La cuantía del negocio se multiplica por el TIIE correspondiente y, luego de utilizarse una calculadora, se oprime sólo la tecla por ciento "%" y no la relativa al signo igual "=", que dará como resultado el interés mensual (veintiocho días); el que debe multiplicarse por el número de meses que probablemente durará el juicio de amparo indirecto (o directo según sea el caso), lo cual arrojará la cantidad de daños y perjuicios que debe garantizar la quejosa por el otorgamiento de la medida suspensional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
III.2o.C.8 K (10a.)

Queja 201/2014. Raúl Octavio Echegollén Solórzano. 8 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes.

Incidente de suspensión (revisión) 236/2014. Elaichi Holdings, C.V. (S. de R.L., constituida de acuerdo a las leyes de Países Bajos). 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: José Luis Pallares Chacón.

Incidente de suspensión (revisión) 370/2014. Impulsora Urbana y Proyectos, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretario: Jesús Antonio Rentería Ceballos.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DELITO CONTRA LA SALUD. NO SE ACREDITA LA MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN EN SU HIPÓTESIS DE COMPRA AGRAVADA (POR ENCONTRARSE EL INCULPADO A MENOS DE TRESCIENTOS METROS DE UN CENTRO EDUCATIVO), SINO LA DIVERSA DE POSESIÓN SIMPLE, SI QUIEN LO COMETIÓ ES FARMACODEPENDIENTE Y LA CANTIDAD QUE ADQUIRIÓ ES MENOR O IGUAL A LA PREVISTA EN LA TABLA DE ORIENTACIÓN DE DOSIS MÁXIMAS DE CONSUMO PERSONAL E INMEDIATO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la farmacodependencia debe considerarse como una enfermedad, y que la posesión de un narcótico para consumo personal deriva de una necesidad fisiológica que obliga a un sujeto a consumir la droga, por ende, un adicto no es un criminal; no obstante, sostuvo que ello no se traduce en que cualquier caso de posesión por los farmacodependientes implica que se actualice una excluyente del delito, pues no puede constituir una acción desmedida, sino que debe sujetarse a las dosis máximas establecidas en la tabla de orientación de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud. En ese sentido, si el inculpado, en su calidad de farmacodependiente, fue detenido después de adquirir 3.7 gramos del estupefaciente *cannabis sativa L.*, y ello acontece a menos de trescientos metros del

centro educativo donde estudia; lo cierto es que, acorde con el artículo 478 de la propia ley, al poseer el narcótico en uno de los lugares prohibidos por el legislador para actualizar la causa de exclusión, ello no implica que, atento al principio de mínima intervención o última ratio del derecho penal, se le pueda atribuir una conducta agravada como lo es la comercialización del narcótico en su hipótesis de compra, si del análisis del material probatorio se advierte que lo adquirió para su consumo personal, pues lo que se acredita en ese supuesto es el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple del estupefaciente afecto; menos aún, es dable actualizar la agravante prevista en la fracción II del artículo 475 de la citada ley, a fin de aumentar la pena impuesta por haberla poseído cerca de un centro escolar, porque dicha circunstancia no se previó para la conducta regulada por el diverso 477, porque lo que el legislador trató de sancionar con una mayor pena es la realización de una conducta de comercio con fines de lucro en las inmediaciones de un centro educativo, no así la adquisición y posterior posesión por un farmacodependiente pues, en su caso, la sanción impuesta por aquél es la no actualización de la causa de exclusión y fincarle juicio de reproche por mantener dentro de su radio de acción el narcótico afecto, no obstante que el activo padezca dicha enfermedad y posea una cantidad igual o menor a la permitida.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.77 P (10a.)

Amparo directo 511/2014. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretaria: Elizabeth Franco Cervantes.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. El estudio de la constitucionalidad del precepto citado, el cual prevé que ante la omisión del promovente de señalar la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado cuando no haya recibido la constancia de su notificación o ésta se haya practicado por correo, el Magistrado instructor lo requerirá y le otorgará un plazo de cinco días para cumplimentar ese requisito y, en caso de no hacerlo, tendrá por no presentada su

demanda de nulidad, conforme al derecho de acceso a la impartición de justicia, no debe acotarse a que se vincula con exigencias formales del escrito inicial, sino que debe trascender al fondo, que es la oportunidad en su presentación. En estas condiciones, se justifica la razonabilidad de dicho requisito, porque es el promovente quien conoce la data en que tuvo conocimiento del acto y no existe razón lógica que le permita que no proporcione dicha información al juzgador; tampoco puede calificarse de innecesario, en el entendido de que con él se fija la base objetiva inicial para constatar la oportunidad en la presentación de la demanda; no es excesivo, pues al obrar en poder del justiciable el acto impugnado, debió obtenerlo en un momento determinado, que es de su conocimiento, por lo que no se le obliga a un imposible, como sería exhibir la constancia de notificación de la que carece. En lo que atañe a la consecuencia que prevé el artículo mencionado, no resulta desmedida, si se pondera que, previo a su actualización, debe mediar un requerimiento notificado en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo, donde se precise el yerro incurrido y lo que se requiere para subsanarlo, además de que el justiciable contará con un plazo razonable para este efecto, lo cual no prejuzga en forma determinante sobre la oportunidad de la demanda, como sí ocurriría al desecharla por extemporánea. En cuanto a la proporcionalidad entre la omisión y la consecuencia, se cumple satisfactoriamente, pues no es dable asumir que en aras de privilegiar el acceso a la tutela jurisdiccional, el juzgador se vea obligado a recibir, tramitar y resolver la integridad de los asuntos de su conocimiento, cuando el marco legal establece criterios que, entre otras cuestiones, buscan salvaguardar la seguridad jurídica de quienes pueden ver inmersos sus intereses en el litigio, así como formalidades para constatar dicha oportunidad, como es indicar la fecha en que se conoció el acto, ya que estimar que constituye una cuestión que puede enmendarse en el devenir de la instrucción, con motivo de la intervención de las demás partes procesales, generaría una situación de incertidumbre, sobre el hecho de que efectivamente comparezcan en tiempo y forma, aportando las constancias relativas que sustenten dicha notificación, máxime que la fecha de conocimiento del acto expresada por el demandante, puede o no coincidir con la que obre en la constancia de notificación de la autoridad, por lo que se estaría ante la posibilidad de que se emita una resolución de fondo sobre la legalidad de un acto que podría considerarse consentido, por no promover oportunamente el medio de defensa respectivo. Por tanto, el artículo 15, fracción VI y penúltimo párrafo referido, no viola el derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.1o.1 A (10a.)

Amparo directo 528/2014. Eduardo Negrete Ramírez. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretario: Edgar Alan Paredes García.

Amparo directo 522/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

Amparo directo 534/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Karla Luz Eduwiges Luna Rodríguez.

Amparo directo 540/2014. Ángel Neftalí Salas Torres. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

Amparo directo 565/2014. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Secretaria: Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo directo 565/2014, aparece en la página 1374 de esta *Gaceta*.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DERECHO A LA HABITACIÓN. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO COMO PARTE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PARA LOS MENORES DE EDAD. Si bien es cierto que los menores de edad tienen derecho a la habitación como parte de la obligación alimentaria, entendida ésta, en su más llana expresión, como el contar con un techo y paredes que lo resguarden de la intemperie y que el Código Civil para el Distrito Federal, en su artículo 1050, la define como: "La habitación da, a quien tiene este derecho, la facultad de ocupar gratuitamente, en casa ajena, las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia.", también lo es que se trata de un derecho de carácter personal y no real como lo sería la propiedad. Consecuentemente, mientras los menores de edad habiten el inmueble adquirido por sus padres, es evidente que con ello éstos cumplen con su obligación alimentaria respecto al rubro de habitación, a pesar de que no satisfagan lo relativo al pago del crédito hipotecario de la propiedad donde habitan.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.153 C (10a.)

Amparo directo 826/2012. 17 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. El artículo 177, tercer párrafo, del Código Fiscal del Distrito Federal prevé que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tratándose de usuarios con tomas de uso doméstico y de aquellos que tengan éstas y las de uso no doméstico, simultáneamente, que no hubieran pagado los derechos a su cargo en dos o más periodos consecutivos o alternados, entre otros supuestos, podrá restringir el suministro de agua a la cantidad necesaria para satisfacer los requerimientos básicos de consumo humano, siempre y cuando se haya realizado la notificación a que se refiere el diverso 437 de ese ordenamiento. La interpretación sistemática del primero de esos preceptos, en relación con los artículos 55, 61 Bis, 87, fracción III y 106, fracciones I y II, de la Ley de Aguas del Distrito Federal, y el punto 56, incisos a), b) y c), de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, lleva a la conclusión de que para proceder de esa manera y garantizar el derecho de acceso al agua de los habitantes de dicha entidad federativa, no basta con que las autoridades realicen la notificación mencionada, sino que es necesario cumplir, además, con las siguientes obligaciones: 1) analizar si procede o no la restricción de agua potable de uso doméstico; 2) informar a los usuarios de los motivos por los cuales se procederá a restringir dicho servicio; 3) averiguar el número de personas que habitan el inmueble para decidir qué cantidad de agua potable debe suministrarse para sus necesidades básicas (considerando que corresponden cincuenta –50– litros por persona al día); 4) investigar y constatar si el inmueble que resulte afectado es propiedad de personas jubiladas, pensionadas, adultos mayores, con capacidades diferentes, madres de familia o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, ya que esos grupos, dependiendo del valor catastral del inmueble de su propiedad, están exentos de la restricción mencionada; y, 5) determinar la capacidad de pago de los distintos usuarios. Para llevar a cabo todas esas acciones, que son congruentes con

los derechos de consulta, información y notificación previstos en el punto 56, incisos a), b) y c), de la referida observación general, las autoridades competentes del Sistema de Aguas de la Ciudad de México están facultadas para realizar visitas de verificación y solicitar la documentación e información necesarias, como se desprende del artículo 106, fracciones I y II, de la Ley de Aguas del Distrito Federal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.99 A (10a.)

Amparo en revisión 378/2014. Patricia Mercado Solís. 22 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR LA APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HIJOS Y BIENES. El Juez de lo familiar, al conocer de las solicitudes de divorcio por voluntad unilateral de uno de los cónyuges, de existir desacuerdo en los convenios debe buscar la continuidad del procedimiento y ordenar la apertura y tramitación de los incidentes respectivos, con la finalidad de que exista un pronunciamiento integral que incluya no sólo la declaración de divorcio, sino también sus consecuencias jurídicas; máxime ante la existencia de menores de edad, pues dejar al arbitrio de las partes la apertura de los incidentes respecto de los hijos y bienes, sería diferir indefinidamente la solución de esos aspectos, al quedar a la voluntad de las partes, lo que llevaría a retardar injustificadamente la solución a cuestiones igual de importantes que la declaración del divorcio, como la relativa a la situación jurídica y afectiva de menores de edad. Por ello, y de conformidad con los artículos 88, 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272 A y 272 B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Juez debe establecer en la sentencia un plazo prudente de cinco días, por ser el que se otorga para dar cumplimiento voluntario a una sentencia para que, en observancia al artículo 287 del Código Civil para el Distrito Federal, las partes manifiesten y acrediten que han acudido al procedimiento de me-

diación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, para intentar, a través de dicho procedimiento, llegar a un acuerdo respecto de los convenios señalados, bajo el apercibimiento de que en caso de no acreditar que han acudido dentro de dicho plazo se entendería su negativa y deberá ordenar la apertura oficiosa de los incidentes relativos a hijos y bienes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.171 C (10a.)

Amparo directo 464/2014. 4 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

E

EMBARGO JUDICIAL. EL JUEZ QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DE DONDE DERIVA ESE GRAVAMEN (JUICIO NATURAL), ES EL COMPETENTE PARA DETERMINAR EXPRESAMENTE SI PROCEDE O NO, POR CADUCIDAD, LA CANCELACIÓN O LA ANOTACIÓN REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL). De una interpretación armónica y sistemática de la legislación mercantil (por ser la ley que regula el juicio natural, artículo 1393) y el Código Civil Federal (artículos 3030, 3031 y 3035), supletorio a la materia mercantil, que regula la función registral y la naturaleza jurídica del embargo, se concluye que tratándose de la anotación de embargo, sólo el juzgador que conoce del asunto puede determinar la actualización del supuesto de caducidad, por ser el único que tiene al alcance las constancias de autos para determinar si el interesado realmente no ha promovido en el juicio correspondiente durante los años previstos para que opere la caducidad y con ello la cancelación del registro; de ahí que la regla general de caducidad de la anotación registral tiene como excepción que todas aquellas anotaciones de embargo registradas por mandamiento judicial, para que proceda su cancelación por caducidad o si es dable la prórroga de aquél, requiere de la orden del propio Juez que determinó su registro. Pensar lo contrario, es decir, aplicar la regla general a todo tipo de anotaciones registrales, tendría el riesgo de que se emitieran resoluciones contradictorias, pues la autoridad registral podría determinar que ya ha transcurrido el plazo para la caducidad (por no tener a su alcance las constancias de autos), mientras que el juzgador, dadas las particularidades del asunto en concreto, podría resolver que aún no ha transcurrido ese plazo (máxime al evidenciarse que la legislación mercantil establece supuestos específicos en los que no procede la caducidad –suspensión del procedimiento–, los cuales también únicamente pueden ser conocidos por el juzgador natural), con la consecuente afectación al principio de seguridad jurídica.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.186 C (10a.)

Amparo en revisión 22/2014. Inmobiliaria Xcunya, S.A. de C.V. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EMBARGO JUDICIAL. SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3010, 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL). De la interpretación sistemática de los preceptos citados se establece quiénes son los sujetos legitimados para solicitar la cancelación del asiento registral, como: I. El registrador quien de oficio puede cancelar: 1) Los avisos preventivos cuando sea inscrito el testimonio que dio origen al aviso; 2) Las anotaciones preventivas cuando se conviertan en inscripción definitiva; 3) Las anotaciones marginales practicadas en el libro o folio destinado al registro de la propiedad de bienes inmuebles, cuando la inscripción que aparece en éstos ha sido cancelada; 4) Las inscripciones relativas a compraventa con reserva de dominio, cuando se inscriba el testimonio en que conste el cumplimiento de la condición suspensiva y la adquisición del pleno dominio, sobre el bien de que se trate; 5) Las anotaciones marginales que aparezcan en los libros del Registro de la Propiedad como referencia a alguna inscripción practicada en los libros del Registro de Comercio, cuando esta última sea cancelada; 6) Las inscripciones de títulos de propiedad o cualquier otro derecho real sobre inmuebles a favor del que enajena, cuando se inscriba el título a favor del adquirente. II. A petición de parte puede solicitarse la cancelación de: 1. Las inscripciones relativas a derechos temporales o vitalicios, cuando el interesado acredite el cumplimiento del plazo o el fallecimiento del titular, siempre que, en su caso, estén cumplidos los requisitos fiscales; 2. Las inscripciones relativas a gravámenes, cuando sea vendido judicialmente el inmueble gravado y se proceda a la inscripción del testimonio correspondiente; 3. Las inscripciones de cédulas hipotecarias o embargos, siempre y cuando previamente el Juez del conocimiento, declare que han transcurrido dos años sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente; 4. Las anotaciones preventivas, cuando haya operado la caducidad; 5. Las inscripciones de hipotecas voluntarias o de prenda, a petición del acreedor, hechas constar en la forma que establezca la ley; 6. Las inscripciones de fianzas convencionales, a petición del acreedor o, en su caso, del fiador, cuando su obligación se extinga por cualquiera de las causas que señala la ley; 7. Las inscripciones de créditos de habilitación o avío o refac-

cionarios, a petición del acreedor, hecha constar en la forma en que señala la ley; 8. Las inscripciones de mandatos, en los casos de revocación hecha constar fehacientemente. III. Por consentimiento de las partes, respecto de inscripciones: 1. De asociaciones civiles y de sociedades civiles o mercantiles, salvo en casos de quiebra; 2. Relativas a fideicomisos; 3. De contratos de promesa; 4. De convenios entre particulares; 5. De emisión de obligaciones o de créditos que han de cubrirse con el producto de la emisión, por acuerdo entre la sociedad emisora y el representante común de los obligacionistas; 6. De emisión de certificados de participación, por acuerdo de la institución emisora y el representante común de los tenedores y IV. Por mandamiento judicial, en relación con: 1. Todas aquellas inscripciones y anotaciones que se hayan practicado, en cumplimiento de un auto o de una sentencia judicial; 2. En general, en todos los casos en que por mandato expreso de la ley, se requiera la intervención del Juez o autoridad competente para decretar la nulidad de la inscripción o anotación que deba cancelarse.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.190 C (10a.)

Amparo en revisión 22/2014. Inmobiliaria Xcunya, S.A. de C.V. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EMBARGOS. SI SE ORDENA SU CANCELACIÓN SOBRE LOS CONSTITUIDOS SOBRE UN INMUEBLE ADJUDICADO JUDICIALMENTE, SON INEFICACES EN TANTO NO PUEDEN RECAER EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, PUES ÉSTA NO ES CONSTITUTIVA DE DERECHOS. El juzgador de instancia puede cancelar los embargos posteriores a la adjudicación de un inmueble sin perjuicio de trastocar la esfera jurídica de quienes se encuentra inscrito a su favor. En efecto, puede ordenarse su cancelación porque, por disposición expresa de la ley, al adjudicar el inmueble se constituye el derecho real de propiedad libre de todo gravamen, por consiguiente, el embargo constituido sobre un bien adjudicado judicialmente es ineficaz en tanto no puede recaer en bienes salidos del patrimonio del deudor, aun cuando la escritura no esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, toda vez que la inscripción no es constitutiva de derechos. Sostener lo anterior, equivale a hacer depender la eficacia de la cosa juzgada en una sentencia –lo cual es de orden público– a la promoción

de diversos juicios, lo que no resulta aceptable porque se trastoca el derecho a la justicia completa con la tramitación de un sinnúmero de juicios. Máxime, cuando la finalidad de la norma civil veracruzana relativa a pasar libre de gravamen un bien adjudicado es, precisamente, culminar el proceso de manera total y sin sujeción a condiciones. Además, debe tomarse en consideración el conocimiento de los embargantes posteriores a la adjudicación del bien respecto a diversos gravámenes anteriores a efecto de establecer que quien inscribió el embargo con posterioridad conocía de aquélla y, por ello, su derecho al cobro con el producto de ese inmueble quedó a expensas del resultado de esos juicios. De esa manera, no podría violarse el derecho de audiencia de quienes inscribieron embargo del bien con posterioridad a la adjudicación a efecto de defender su inscripción, al correr la suerte de un causahabiente procesal, esto es, debe estarse a las resultas de lo dilucidado al respecto en los juicios anteriores, es decir, al resultado de la adjudicación a favor de la parte quejosa, de cuyo trámite también se advierte que no fue suficiente, ni siquiera para pagar diversos créditos. Sin pasar desapercibido que no se trata de analizar la coexistencia de gravámenes o de derechos procesales iguales o preferentes respecto a un bien inmueble, sino lo que se dilucida de fondo es la existencia de un derecho real de propiedad y de un derecho procesal de embargo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.90 C (10a.)

Amparo en revisión 311/2014. Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. 21 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

F

FALSA REPRESENTACIÓN. NO SE ACTUALIZA ESA VIOLACIÓN PROCESAL EN CASO DE QUE UNA DE LAS PARTES HUBIERA TENIDO UN DEFICIENTE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN UN JUICIO POR PARTE DEL PROFESIONISTA QUE DESIGNÓ PARA SU DEFENSA. El artículo 172, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate. En esa disposición se reconoce una de las garantías fundamentales de todo gobernado que tiene como propósito tutelar el derecho de acceso a la justicia, pues sólo a partir de una verdadera representación es que existe la posibilidad de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones. Sin embargo, la citada violación procesal consiste en que el profesionista que fungió como representante del quejoso no hubiera tenido en realidad tal calidad, esto es, que de las constancias del juicio se desprenda que no actuó como apoderado, mandatario o procurador defendiendo los intereses de aquél. Por tanto, dicha hipótesis no se actualiza ni tiene relación con un deficiente asesoramiento jurídico o un mal desempeño en la actividad profesional de algún representante de las partes, pues corresponde a éstas vigilar que la designación de su defensor recaiga en una persona competente; máxime que no existe disposición alguna que prevea la posibilidad para que el tribunal de amparo ordene la reposición del procedimiento para poder subsanar esa falta.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.24 K (10a.)

Amparo directo 921/2014. Agustín Carvantes Olvera. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Agustín Gaspar Buenrostro Massieu.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA PUEDE REALIZARSE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. El artículo 16, párrafos primero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad de realizar detenciones en flagrancia, entendiéndose por éstas, aquellas en que se sorprenda a una persona durante la comisión del delito; y como una segunda hipótesis, contempla que también existirá flagrancia cuando se detenga al probable responsable en el "momento inmediato posterior" a la comisión del delito, entendiendo por éste al que se genera con la persecución material del sujeto, es decir, durante su huida física u ocultamiento cuando se acaba de cometer el ilícito; disposición que es acorde con el artículo 7, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que prohíbe la detención arbitraria. Por su parte, el artículo 202, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, abrogado, prevé que en el caso de delitos graves, las personas pueden ser detenidas "dentro de las cuarenta y ocho horas" posteriores a la comisión del hecho delictivo, cuando sean señaladas como responsables por el ofendido, la víctima, por algún testigo o quien hubiese participado con ellos en la comisión del delito; cuando se encuentre en su poder el instrumento o producto del delito, o aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en éste, siempre que se haya iniciado la investigación ministerial y no exista interrupción en la persecución de la persona. Ahora bien, el citado precepto vulnera el derecho humano al debido proceso, por no respetar la ratio que gira en torno a la flagrancia, pues el Constituyente Permanente no autorizó aquella excepción para detener a una persona con una extensión de hasta cuarenta y ocho horas más de haber cometido los hechos delictuosos, lo que contraviene el mencionado artículo 16, párrafo quinto, constitucional, en tanto que sólo puede detenerse a una persona en el momento en que está cometiendo el delito o inmediatamente después.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.4o.P.T.16 P (10a.)

Amparo directo 40/2014. 21 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Sebastián Martínez García. Secretario: Ismael Martínez Reyes.

Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Cuando el artículo 16 del reglamento citado dispone que el ascenso al grado inmediato para los militares que, por resolución definitiva, pasen a situación de retiro, será únicamente para el cálculo y otorgamiento del beneficio económico correspondiente, no desarrolla, complementa o detalla lo dispuesto en el artículo 27 de dicha ley, sino que va más allá, toda vez que limita el beneficio de ascender al grado inmediato, cuando se pase a situación de retiro, sólo para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico, cuando conforme a la ley comprende todos los aspectos que puedan estar vinculados con los derechos y obligaciones que adquiere el militar en situación de retiro, de modo que la norma reglamentaria viola el principio de subordinación jerárquica.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.5 CS (10a.)

Amparo en revisión 370/2014. Presidente de la República y otro. 22 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Michelle Lowenberg López.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

G

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SUS ATRIBUCIONES, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL, SON TAMBIÉN DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el pueblo mexicano ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y, en lo que hace a los regímenes interiores de las entidades federativas, sus Constituciones "en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal". Sin embargo, ello no significa que las atribuciones del encargado del despacho, en el caso de ausencia temporal de un Gobernador Constitucional, deben sujetarse necesariamente a las facultades del encargado del despacho de la Presidencia de la República en el supuesto de ausencia temporal de su titular, porque una interpretación así, más que ser conforme, se convierte en una resolución de invasión a la autonomía interna de los Estados en la determinación de sus regímenes internos, en franco desdoro de su autonomía para definir, soberana y libremente, las atribuciones de sus órganos, dada la realidad política de cada uno. Cabe señalar que la interpretación conforme no constituye un aspecto de inconstitucionalidad, sino del ejercicio libre y de autonomía de cada Estado, reconocido en la Constitución Federal; de ahí que tampoco resultan válidas las interpretaciones analógica y extensiva de una norma constitucional local, pues debe privilegiarse el federalismo, no como sistema jurídico de gobierno, sino como forma de Estado. Por tanto, las atribuciones del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, en caso de ausencia temporal, son también del encargado del despacho del Poder Ejecutivo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.A.T.46 A (10a.)

Amparo en revisión 50/2014. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otros. 30 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

GUARDA Y CUSTODIA. SI EN LA CONTIENDA DE DIVORCIO SE ESTABLECIÓ QUE LA TENDRÍA LA MADRE Y A LA MUERTE DE ÉSTA LOS ABUELOS MATERNOS LA EJERCIERON DE HECHO Y EL PADRE, EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, PRETENDE RECUPERAR AQUÉLLA, DEBE HACERLO MEDIANTE JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Cuando por cualquier circunstancia los abuelos ejerzan la guarda y custodia de hecho sobre un menor y el padre en ejercicio de la patria potestad pretenda cambiar el entorno de éste, no podrá por ese simple derecho efectuarlo sin audiencia, porque al ser el menor sujeto de derecho debe ser oído y vencido atento al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello, si bien es cierto que el artículo 343 del Código Civil para el Estado de Veracruz establece que cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos corresponderá su ejercicio al otro, también lo es que éste no puede ser aplicado en su máxima locución, en atención a que la patria potestad es una institución creada en beneficio de los menores y no de los progenitores al constituir una función encomendada a éstos en favor de sus hijos dirigida a su protección, educación y formación integral. Por ende, si en una contienda de divorcio se estableció que la guarda y custodia la tendría la madre; y se demostró que el menor tuvo su domicilio con los abuelos maternos y a la muerte de la progenitora éstos ejercieron la guarda y custodia de hecho, si el padre pretende recuperarla en ejercicio de la patria potestad, debe hacerlo mediante juicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.91 C (10a.)

Amparo en revisión 326/2014. 21 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Griselda Sujey Liévanos Ruiz.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO EN REVISIÓN. LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO RIGE CUANDO ES LA PROPIA QUEJOSA QUIEN SOLICITA SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO. La regla prevista en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativa a la vista que debe darse a la quejosa con la existencia de una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, no rige en el supuesto de que sea la propia quejosa quien solicita se decrete el sobreseimiento en el juicio, apoyándose en ese mismo motivo de improcedencia, resultando innecesario darle vista con lo que ella ya conoce e, incluso, solicitó.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
XXIV.1o.3 K (10a.)

Amparo en revisión 488/2014. Juana Bautista Fuentes. 22 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Iván Benigno Larios Velázquez. Secretaria: Graciela Azpilcueta Morales.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. AUN CUANDO ESTÁ RELACIONADA CON UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SÓLO PUEDE SER PROMOVIDO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por regla general, las causas de improcedencia pueden alegarse en cualquier momento del juicio y el tribunal estará obligado a pronunciarse respecto de su actualización. La falsedad de la firma de la demanda de amparo conlleva la falta de voluntad de la parte agraviada, aspecto que se relaciona con la procedencia del juicio. Sin embargo, esta causa de improcedencia no puede propo-

nerse ante el Tribunal Colegiado que conoce del amparo en revisión pues, para su demostración, es necesario tramitar el incidente de previo y especial pronunciamiento previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo, cuyas reglas de tramitación limitan su promoción hasta la audiencia constitucional. La jurisprudencia P./J. 91/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que se puede plantear el incidente respectivo ante el Tribunal Colegiado cuando se cuestiona la autenticidad de la firma de la demanda de amparo directo o algún recurso de su competencia, conclusión que obtuvo luego de precisar que las reglas de tramitación del incidente mencionado son distintas en una y otra vías, por lo que dicho criterio no es aplicable, aun analógicamente, al amparo indirecto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.21 K (10a.)

Recurso de reclamación 2/2015. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otro. 16 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Ana Margarita Mejía García.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 91/2006 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 7, con el rubro: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE LAS FIRMAS DE LA DEMANDA O RECURSO EN AMPARO DIRECTO. ES ADMISIBLE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE EL ASUNTO SE LISTE Y DEBE RESOLVERSE CONJUNTAMENTE CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA."

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. En relación con esto, su artículo 5o., fracción II, refiere que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. La creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados; siendo éstas las de subordinación, supraordinación y coordinación, y conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación

frente los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otro lado, de los artículos 115 a 118 de la propia ley, se deduce que el informe justificado es un documento que el ente señalado como responsable rinde en el juicio de amparo en cumplimiento de un mandato del Juez de control constitucional, y mediante él, se remiten constancias y se hacen manifestaciones relacionadas con la certeza del acto reclamado, su legalidad o constitucionalidad, su fundamento, y determinados datos en amparo en materia agraria. Así, dicho informe es un acto que se da en un proceso en el cual quien lo emite tiene el carácter de parte, sujeta a una relación de subordinación frente al Juez, y de coordinación frente a su contraparte, generalmente el quejoso. Y si bien su rendición se da en el marco de una norma, ésta no lo traduce en una facultad, sino en un "deber procesal" que, de incumplirse, por regla general, hace que se presuma cierto el acto reclamado e, incluso, que se sancione a la obligada, en términos del artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Consecuentemente, el informe justificado no es un acto que se verifique en una relación de supra a subordinación de su emisor frente a otros sujetos; luego, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.75 K (10a.)

Amparo en revisión 391/2014. Rainer Gerhard Hummel. 26 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ESTÁ OBLIGADO A RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE INTERCONEXIÓN INICIADOS A INSTANCIA DE PARTE. Debido a que en nuestro país un segmento importante de la red de telecomunicaciones públicas está bajo la titularidad y eventual gestión de uno de los concesionarios, su uso por parte de los otros debe ser objeto de acuerdos en cuanto a las condiciones y términos bajo los cuales se interconectarán, en la inteligencia de que, en caso de eventuales diferendos, será la autoridad quien los resuelva. En estas condi-

ciones, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 426/2010, la resolución de los desacuerdos en materia de interconexión por parte de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (cuyas funciones fueron asignadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones), se desarrolla a través de un procedimiento administrativo que se sigue en forma de juicio, el cual inicia con la solicitud de intervención formulada ante el órgano regulador por cualquiera de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones involucrados, a quienes debe otorgarse la oportunidad de probar y alegar lo que a sus intereses legales convenga. Dicha solicitud constituye el mecanismo jurídico a través del cual el promovente ejerce su derecho de instancia ante la autoridad para obtener respuesta sobre la determinación de las condiciones de interconexión que no se hayan podido convenir. En consecuencia, en los procedimientos para la resolución de esos desacuerdos iniciados a instancia de parte, el órgano regulador está obligado frente a los concesionarios intervinientes, a respetar el derecho fundamental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar efectivamente las condiciones jurídicas que posibiliten el reconocimiento y el ejercicio de su derecho de instancia, mediante la emisión de una resolución.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.49 A (10a.)

Amparo en revisión 84/2014. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO MENOR DE EDAD CUANDO RECLAMA QUE LO PRIVARON DE CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMARIA), SIN QUE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE (AUTORIDAD RESPONSABLE) LE EXPRESARA LAS RAZONES Y LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES OBSTACULIZÓ EL EJERCICIO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. El derecho de un menor de edad a recibir educación básica se hace presente al llevar a cabo las gestiones conducentes para acceder a ese servicio que brinda el Estado, de manera que, al obtener respuesta negativa a su pretensión, surge la lesión a su esfera jurídica, ya que la educación atañe a

un derecho fundamental, así reconocido por el derecho supranacional y el Máximo Ordenamiento Legal del País, que comprende no sólo una prerrogativa del menor, sino una obligación también a cargo del Estado. Esta consideración se fortalece si se toman en cuenta las reflexiones que sobre el tema del interés superior del menor sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO.", conforme a las cuales el "interés superior de la niñez" implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esta etapa de la vida humana tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas, y luego que, ante ese principio, las instituciones de bienestar social públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos converjan en corresponder a ese interés superior del menor, por lo que deben procurar en todo momento alcanzar el objetivo fundamental de esa protección, para lo cual es menester asegurar la oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en condiciones idóneas en todos los aspectos de su vida. Ante esa perspectiva, si el quejoso menor de edad acudió ante la institución correspondiente a efecto de que le permitiera continuar con su instrucción de educación básica, que es un derecho fundamental reconocido constitucional y convencionalmente, pero aquélla le privó el acceso a ser educado, sin que le expresaran las razones y los fundamentos por los cuales obstaculizó el ejercicio de ese derecho fundamental, es evidente que se afectó su interés jurídico, porque la obstrucción a la educación atenta contra el desarrollo óptimo de sus condiciones de vida elementales; de ahí que pueda acudir al juicio de amparo indirecto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.

VIII.1o.P.A.1 K (10a.)

Amparo en revisión 323/2014. José Karid Ayup Schumm. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Octavio Bolaños Valadez. Secretaria: San Juana Alonso Orona.

Nota: La tesis 1a./J. 25/2012 (9a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 334.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NO DEBE INTERPRETARSE AL GRADO DE TENER POR ACREDITADO UN DELITO QUE NO SATISFACE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL RESPECTIVO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los lineamientos a seguir por las

autoridades jurisdiccionales cuando en los procedimientos que ante ellas se tramiten intervengan menores de edad, destacando que el concepto de interés superior de la niñez, tutelado en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como un principio de naturaleza constitucional e internacional, considera el desarrollo de niñas y niños y el ejercicio pleno de sus derechos como criterios rectores en la elaboración de normas y en su aplicación, en todos los órdenes relativos a la vida del niño; reglas que se han recogido en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, dicho interés superior del menor no debe interpretarse al grado de tener por acreditado un delito que no satisface los elementos del tipo penal respectivo, pues su función no es ésa sino que implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger el desarrollo de los infantes y el ejercicio pleno de sus derechos; por tanto, si en el caso se advierte que la autoridad responsable determinó que con los datos aportados en la averiguación previa no se demostraron los elementos constitutivos de determinado delito cometido contra un menor de edad, ello de ninguna forma implica que se transgreda su interés superior.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.76 P (10a.)

Amparo en revisión 240/2014. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERESES USURARIOS. EL ELEMENTO NOTORIEDAD RESULTA INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN OFICIOSA DE LOS PACTADOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 47/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 402, de título y subtítulo: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", estableció que el párrafo segundo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré, el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto,

operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, esto es, que no sean usurarios. En este sentido, confirió al juzgador la facultad para que, al ocuparse de resolver la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva. Por tanto, para que el Juez actúe oficiosamente en reducir el interés pactado, debe saltar a la vista de inmediato, sin mayor reflexión, ni investigación, por lo cual, lo excesivo no debe resultar de una innecesaria indagación o investigación de parámetros determinados para las relaciones mercantiles, sino que sea un dato objetivo que derive del mismo monto del interés mensual o anual pactado; orienta en este sentido el significado de notoriedad como se ha entendido, por ejemplo, para la acción de notoriedad de falsificación de firmas de los cheques, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que lo notorio debe entenderse solamente como: la verificación visual de que la firma que ostenta el título, corresponde (o no) con la firma que tiene registrado el banco librado como autorizada para emitir cheques, sin mayor reflexión.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.189 C (10a.)

Amparo directo 401/2014. Cuauhtémoc Reyes Chirinos. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

J

JORNADA EXTRAORDINARIA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL TRABAJADOR CUANDO LA RECLAMADA EXCEDE DE 9 HORAS SEMANALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). El artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2012, establece: "La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales.". De lo anterior, se concluye que la carga de la prueba en relación con la jornada de trabajo corresponde al patrón, excepto cuando se reclame una jornada extraordinaria que exceda de 9 horas semanales; esto es, que luego de ese número de horas extraordinarias, los trabajadores deben probar que laboraron en esa jornada pues, en ese caso, la fatiga probatoria para demostrar ese hecho en que se funda la demanda, corresponderá al propio actor.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.9o.T.44 L (10a.)

Amparo directo 1786/2014. Marcelino Manuel Haro Morales. 18 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Emilio González Santander. Secretaria: Adriana María Minerva Flores Vargas.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. EL MERO ABANDONO DEL INMUEBLE ARRENDADO NO LO DEJA SIN MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro dispone la diligencia de lanzamiento del arrendatario como el momento formal en que el arrendador puede recuperar el uso y disfrute de la finca arrendada; consecuentemente, para el caso de que el inmueble se halle abandonado, esa sola circunstancia de ningún modo dejaría sin materia el juicio sumario de desahucio, pues la acción no sólo implica desocupar el inmueble, sino restituir en el uso y disfrute de la finca al arrendador, mediante su devolución o entrega formal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
XXII.1o.5 C (10a.)

Amparo directo 440/2014. Mónica Cecilia Morelos Rabell. 6 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretario: Sigfredo Omar Ceballos Ruiz.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. NO QUEDA SIN MATERIA POR LA MUERTE DEL ARRENDATARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). De acuerdo con los artículos 502 a 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, esta vía especial procede ante el impago de dos o más rentas consecutivas y, si bien, persigue el cobro de dichas mensualidades vencidas más las que se sigan venciendo, también busca el lanzamiento del inquilino contumaz, lo cual se cristaliza con la entrega real, material y jurídica al arrendador del inmueble objeto del arrendamiento; consecuentemente, la muerte del arrendatario no deja sin materia el juicio sumario de desahucio, pues mientras el inmueble no haya sido devuelto judicialmente al arrendador, éste no puede ocuparlo ni disponer de él lícitamente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
XXII.1o.4 C (10a.)

Amparo directo 440/2014. Mónica Cecilia Morelos Rabell. 6 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretario: Sigfredo Omar Ceballos Ruiz.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

L

LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA TIENE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA PROMOVERLO CONTRA LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA QUE PUEDE AFECTAR EL INMUEBLE EN EL QUE REALIZA SUS FUNCIONES, OTORGADA CON APOYO EN UNA LEY ANTE LA QUE SE ENCUENTRA EN UN PLANO DE IGUALDAD CON QUIEN GESTIONÓ A SU FAVOR EL ACTO. Conforme al artículo 7o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene legitimación para promover el juicio de amparo indirecto contra la expedición de una licencia de factibilidad de uso de suelo para la construcción de una gasolinera, cuando puede resentir alguna afectación patrimonial, con motivo de que un hospital, en cuyo inmueble realiza sus funciones de seguridad social, pueda ser afectado por la cercanía con el predio de la gasolinera que se ubica a una distancia menor que la establecida, como mínimo de resguardo, en el artículo 122 Bis, fracción III, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Ello, porque se genera un riesgo que debe controlarse, al estar involucrado un establecimiento para el manejo de sustancias inflamables que, entre otras cosas, podrían producir una explosión, contaminación, u otro evento en el entorno que produzca una afectación al citado inmueble. Aunado a lo anterior, la referida afectación patrimonial se advierte respecto a una relación jurídica en la que el instituto recurrente se encuentra en un plano de igualdad con los particulares terceros interesados, que gestionaron a su favor el acto, porque esa igualdad acontece ante la ley que regula la emisión del acto reclamado, a la cual deben someterse al acudir ante las autoridades administrativas correspondientes, sobre todo, porque el instituto quejoso no cuenta con facultades legales para emitir algún acto unilateral a través del cual pudiera crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas con las que lograra la insubsistencia de la licencia referida, sin la necesidad de acudir a los órganos correspondientes ni contar con el consenso de la voluntad de quienes puedan resultar afectados.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.

(V Región)5o.24 K (10a.)

Amparo en revisión 384/2014 (cuaderno auxiliar 1131/2014) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. Instituto Mexicano del Seguro Social. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alexis Manríquez Castro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Edwin Jahaziel Romero Medina.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

M

MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN. Una cuestión de criterio o debatible no se conforma por el hecho de que un funcionario judicial plantee lo que a su parecer es un problema jurídico, ni vierta manifestaciones que en su apreciación constituyen una labor interpretativa, sino que tiene que examinarse si esa supuesta función hermenéutica se justifica en un problema jurídico verdaderamente válido, que no enmascare un franco apartamiento de la legalidad cuando el texto de la ley es suficiente para conocer su sentido; de otro modo se haría nugatorio el deber de las autoridades de apegar sus actos a la legalidad y, a la vez, de sancionarlos cuando muestren una notoria ineptitud en su encargo. En este sentido, deviene pertinente acudir a la doctrina jurídica del "margen de apreciación del juzgador", concebida para conceptualizar un espacio de discrecionalidad tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales, por lo que constituye un instrumento interpretativo que parte de la idea de que un derecho no puede juzgarse en abstracto, omitiendo los marcos culturales y económicos que lo circundan; por el contrario, existen condicionamientos materiales y sociales cuyo desconocimiento quitaría realidad o vigencia a un régimen de derechos humanos que, en el caso, encuentran justificación en el marco cultural del país, con el objeto de promover la credibilidad en la actuación de los Jueces ordinarios, de manera que cuando éstos puedan incurrir en alguna causa de responsabilidad administrativa, sean efectivamente sancionados. Dicha doctrina debe traerse a colación para determinar el alcance de los derechos a debate jurisdiccional, lo que cobra vigencia si se toma en cuenta que el innegable principio universal de independencia que debe reconocerse a todo juzgador debe ser ponderado a la luz del principio de legalidad, que el sistema constitucional mexicano erige también como elemento fundamental para la preservación del Estado Constitucional de Derecho. Por consiguiente, sin des-

conocer que es imprescindible reconocer la independencia de los órganos jurisdiccionales, este principio fundamental (margen de apreciación) puede emplearse para dimensionar los derechos y contextualizarlos con la situación específica de cada región, y debe ser ponderado frente a la legalidad que, en la actualidad, se erige como una exigencia propia del contexto social, económico y jurídico, para que la independencia judicial encuentre equilibrio en la responsabilidad del juzgador al desplegar su actuación, partiendo de la base de que todo Juez es responsable de su actuar.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.A.T.18 K (10a.)

Amparo en revisión 126/2013. Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. 13 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 126/2013, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2546.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA). Ante la viabilidad de la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de medidas precautorias, las de aseguramiento previstas en éste, no pueden confundirse con las providencias precautorias establecidas en el Código de Comercio, al tener fines diferentes y, por tanto, situaciones jurídicas distintas. Ahora bien, de la lectura del artículo 384 del citado código federal se advierte que es apelable la negativa a decretar las medidas de aseguramiento, no así lo relativo a su concesión o decreto, de lo que se sigue que si la regulación de la institución dentro del código mercantil es insuficiente, dicha normatividad admite la posibilidad de que se apliquen supletoriamente las reglas del enjuiciamiento civil federal; lo que implicará que dicha supletoriedad al pretender colmar una deficiencia o insuficiencia por la falta total o parcial de la institución, que impide dirimir el caso planteado, al aplicarse la misma a un juicio ordinario mercantil, se permitirá la integración y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijan los principios aplicables a la regu-

lación de la ley suplida, por lo que debe aceptarse que existe un reenvío del Código de Comercio (norma especializada) al Código Federal de Procedimientos Civiles (norma general), respecto al desarrollo de las medidas de aseguramiento, las cuales al existir el aludido reenvío se regirán conforme a la legislación procesal civil federal, sin poder aplicar en materia de recursos el Código de Comercio por no ser el que rige a la ley supletoria. De ahí que se actualice la excepción al principio de definitividad prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que con motivo de sus reformas obligan al órgano jurisdiccional a establecer si es clara y precisa la procedencia de un recurso contra el acto reclamado o que ante la duda, resulte optativo para el gobernado agotarlo o acudir al amparo; de ello se advierte que al estar ante la presencia de un recurso de dudosa procedencia porque en el juicio ordinario mercantil se aplican supletoriamente las medidas de apremio previstas por el Código Federal de Procedimientos Civiles mientras que las contempladas en el de Comercio permiten la interposición del recurso de apelación, en el caso de las reguladas por el primer ordenamiento no prevé recurso alguno para impugnarlas; de ahí que ante la duda de qué legislación es la que debe aplicarse en materia de recursos cuando se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a un juicio ordinario mercantil es que procede el amparo indirecto sin necesidad de agotar recurso alguno por actualizarse la referida excepción.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.160 C (10a.)

Queja 41/2014. Sheares Investments, B.V. y otra. 27 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Amparo en revisión 60/2014. Comisión Federal de Electricidad. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

MOTÍN. LA ACCIÓN TUMULTUARIA Y VIOLENTA DE UN GRUPO DE PERSONAS PARA IMPEDIR A LA AUTORIDAD POLICIACA LA EJECUCIÓN DE UN MANDATO DE AUTORIDAD NO CONFIGURA DICHO DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 157 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla (actual Código Penal), el delito de motín se configura con: a) la actividad de diversas personas para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley; b) que se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público;

c) empleen violencia en las personas o sobre las cosas; y, d) o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación. En este sentido, no puede estimarse que la acción tumultuaria y violenta de un grupo de personas para impedir a la autoridad policiaca la ejecución de un mandato de autoridad, configure el antijurídico citado, ya que no se demuestra que con los actos perpetrados por los activos se amenace la estructura jurídica o material del Estado, o su organización política, intimidando a la autoridad para obligarla a tomar alguna determinación o evitar el cumplimiento de una ley; pues dicho antijurídico se encuentra en la sección cuarta, del capítulo primero, del libro segundo, del código mencionado, relativo a los delitos contra el orden constitucional y la seguridad del Estado, y se sanciona por cuanto en cualquier momento puede ponerse en peligro su estabilidad; de ahí que si no se acredita este elemento, que implica una afectación grave a la seguridad del Estado, no pueden tenerse por configurados los elementos del delito en cuestión.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.1o.P.28 P (10a.)

Amparo en revisión 296/2014. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Gazca Cossío. Secretaria: María Isabel Claudia Hernández Alducín.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

N

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Cuando a través del juicio de amparo indirecto se reclama la aprobación de la propuesta del no ejercicio de la acción penal dictada en una averiguación previa, y previamente no se agota el recurso de inconformidad a que se refiere el numeral 3, fracción XVI, inciso a), última parte, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, pues la determinación reclamada no constituye la resolución definitiva dictada en la indagatoria de que se trata, en razón de que, en su contra, procede el recurso de inconformidad, a través del cual puede ser modificada o revocada y, en ese sentido, es la determinación que resuelva este medio de impugnación, la que en su caso podrá ser impugnada a través del juicio de amparo biinstancial, por ser la que ponga fin al procedimiento de averiguación previa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.25 P (10a.)

Queja 106/2014. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretaria: Alejandra Jarquín Carrasco.

Amparo en revisión 274/2014. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: José Rodulfo Esquinca Gutiérrez.

Queja 107/2014. 26 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: José Rodulfo Esquinca Gutiérrez.

Amparo en revisión 294/2014. 12 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Enrique Alejandro Santoyo Castro.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NO ES SUSCEPTIBLE DE INVOCARSE COMO NOTORIA Y MANIFIESTA, Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE HASTA QUE AQUÉLLA SE ADMITE Y LA LITIS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA. Si a través del juicio de amparo indirecto se reclama la aprobación de la propuesta del no ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, y previamente no se agota el recurso de inconformidad a que se refiere el numeral 3, fracción XVI, inciso a), última parte, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no debe desecharse la demanda en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues además de que la mencionada ley orgánica no establece la suspensión del acto reclamado, esta causa de improcedencia no es susceptible de invocarse como notoria y manifiesta, en razón de que en los párrafos segundo y tercero de la fracción que se analiza, se prevén excepciones para no agotar los recursos o medios de defensa que la ley establezca, a saber, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, que en el informe justificado, la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado; situaciones que sólo es posible analizar en audiencia constitucional, esto es, admitida la demanda de amparo e integrada debidamente la litis en el juicio de tutela constitucional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.26 P (10a.)

Queja 106/2014. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretaria: Alejandra Jarquín Carrasco.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

O

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI EL TRABAJADOR PRECISA UN SALARIO QUE EL PATRÓN ACEPTA Y OFRECE EN SU CONTESTACIÓN, PERO DE AUTOS QUEDA DEMOSTRADO QUE AQUÉL PERCIBÍA CIERTA REMUNERACIÓN ADICIONAL EN FORMA ORDINARIA.

AMPARO DIRECTO 1364/2014. 22 DE ENERO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: OMAR DAVID UREÑA CALIXTO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—En los conceptos de violación, el impetrante manifiesta que la Junta dictó un laudo incongruente, así como carente de fundamentación y motivación, toda vez que:

–Consideró que el ofrecimiento del empleo fue de buena fe, siendo que la empresa negó que el gerente distribuyera las propinas y nunca lo acreditó; lo cual significa que el actor no las recibía de los clientes.

–La oferta de trabajo debe ser considerada de mala fe, ya que la empresa manifestó que se incluiría "el derecho del actor a seguir recibiendo las propinas que los clientes por su propia voluntad le entreguen al actor por sus servicios"; por lo cual, tácitamente lo está privando de su participación en dichas propinas al ser distribuidas por el gerente, pues el empleado no era mesero, sino jefe de piso.

–La oferta de empleo debe ser considerada de mala fe, pues se hizo con el mismo salario por cuota fija que devengaba el actor en la fecha del despido, no obstante que ha transcurrido más de un año y no se incluyeron los incrementos.

–La empresa también omitió precisar que se ofrecía el empleo con un horario de martes a domingo, cubriendo el pago de la prima dominical.

–La empresa refirió al contestar: "... y tan no pudo haber sido despedido que el actor dice haber sido despedido a las 18:00 horas, siendo que el actor a esa hora ya no se encontraba dentro de las instalaciones de mi representada ..."; por lo cual, esa afirmación debió formar parte de la litis y ser probada por la demandada, correspondiéndole la gabela procesal.

Los motivos de inconformidad sintetizados son fundados. Para arribar a esta conclusión, se debe de suplir la queja en su deficiencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

La oferta de trabajo no constituye una excepción, pues no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que es una manifestación que hace el patrón para que la relación laboral continúe; por tanto, si el operario insiste en el hecho del despido injustificado, le correspondería demostrar su afirmación, pues el ofrecimiento del empleo en los mismos términos y condiciones produce el efecto jurídico de revertir al trabajador la carga de probar el despido.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 168 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 136, que dice:

"DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. El ofrecimiento del trabajo no constituye una excepción, pues no tiende a destruir la acción ejercitada, sino que es una manifestación que hace el patrón para que la relación de trabajo continúe; por tanto, si el trabajador insiste en el hecho del despido injustificado, le corresponde demostrar su afirmación, pues el ofrecimiento del trabajo en los mismos términos y condiciones produce el efecto jurídico de revertir al trabajador la carga de probar el despido."

Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la entonces Cuarta Sala, estableció que la oferta de trabajo es una figura sui géneris dentro del juicio laboral, aun cuando se encuentra asociada a la negativa del despido, no tiene como objeto directo e inmediato destruir la acción intentada ni demostrar que son infundadas las pretensiones deducidas en el juicio, por lo que la calificación de buena o mala fe se tiene que interpretar conjuntamente con la contestación de la demanda y las circunstancias

que rodean al hecho, pues como se tiene dicho, se trata de una proposición para continuar la relación laboral ante la negativa del despido y, por tanto, ésta no debe calificarse en forma rígida y abstracta, sino de acuerdo con los antecedentes del caso, la conducta procesal de las partes y todas las circunstancias que permitan concluir si se realizó de buena fe, es decir, si revela la verdadera intención del patrón de que se continúe la relación laboral o, en su caso, si el ofrecimiento se planteó con el propósito de revertir la carga de la prueba.

El ofrecimiento de trabajo será de buena fe siempre que no afecte los derechos del trabajador y cuando no contraríe la ley. A contrario sensu, la oferta será de mala fe cuando afecte al operario en sus derechos y pugne con la ley; igual cuando se ofrezca un empleo diferente al que se venía desempeñando o al modificar los términos y condiciones de la relación en perjuicio del trabajador, esto es, cuando su regreso sea con inferiores condiciones, o bien, que se ofrezca en los mismos términos, pero en oposición a lo legalmente permitido.

También será de mala fe si el patrón, al momento de ofrecer el empleo, asume una doble conducta que contradiga su intención de continuar con la relación laboral, pues una propuesta en tales condiciones será reveladora de que no existe sinceridad, ni honesta voluntad para que el trabajador sea reintegrado.

En suma, habrá mala fe cuando el patrón pretende, a través del ofrecimiento, que el trabajador regrese con un salario menor, con una categoría inferior, con una jornada de trabajo mayor, es decir, todo aquello que entrañe implantación de condiciones que el operario no aceptaría; lo cual, traerá como consecuencia que no se revierta la carga de la prueba al actor, sino que sea a cargo del patrón.

Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 151 y 154 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, páginas 124 y 126, respectivamente que establecen:

"DESPIDO DEL TRABAJADOR. CARGA DE LA PRUEBA.—Cuando el patrón niegue haber despedido al trabajador y ofrezca admitirlo nuevamente en su puesto, corresponde a éste demostrar que efectivamente fue despedido, ya que en tal caso se establece la presunción de que no fue el patrón quien rescindió el contrato de trabajo, por lo que si el trabajador insiste en que hubo despido, a él corresponde la prueba de sus afirmaciones."

"DESPIDO DEL TRABAJADOR, PRESUNCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL.—El trabajador que se dice despedido y reclama el cumplimiento del contrato de trabajo, consistente en la reinstalación y pago de salarios caídos, tiene en su favor la presunción de la certeza del despido, presunción que se basa en la consideración de que no es lógico pensar que una persona que ha abandonado el trabajo reclame del patrón en un plazo relativamente breve, como es el de un mes (ahora dos en la ley actual) que la ley establece para deducir la acción respectiva, que le vuelvan a dar trabajo; y si bien esa presunción admite prueba en contrario, no puede considerarse como tal prueba la que acredite que el trabajador dejó de prestar sus servicios en los días siguientes a la fecha en que dijo haber sido despedido, pues lejos de desvirtuar la presunción, su falta de trabajo puede corroborar la existencia del despido."

Para calificar el ofrecimiento de trabajo que el patrón formule a su empleado al contestar la demanda, deben tomarse en consideración los siguientes elementos:

a) Las condiciones fundamentales de la relación laboral, como puesto, salario que ordinariamente percibía, jornada y horario;

b) Si dichas condiciones en que se ofrece, afectan los derechos del trabajador establecidos en la Ley Federal del Trabajo, contrato colectivo o individual; y,

c) Que la oferta se analice con relación a los hechos del caso y conducta asumida por el patrón.

En el caso concreto, ********** demandó de **********, el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos, como consecuencia del despido que adujo fue objeto.

En los hechos relató que se le asignó la categoría de ********** y que devengó como último salario diario el de $ ********** **********.

**********, negó el despido y ofreció el trabajo en los siguientes términos:

"... a su disposición el puesto que venía desempeñando en los mismos términos y condiciones en que lo ha venido haciendo, más los aumentos y mejoras que por ley se decreten al mismo y que son los siguientes ... b) Puesto o categoría: **********. b) (sic) Salario diario: $ ********** ..."

La Junta dictó el laudo reclamado, en donde analizó el ofrecimiento de trabajo en los siguientes términos:

"… lo ofrece con la categoría de jefe de piso, un salario de $ **********, condiciones de trabajo afirmadas por la actora y una jornada de 6:00 a 14:00 horas de martes a domingo con 30 minutos para tomar alimentos dentro de las instalaciones de la demandada que desde luego resulta legal, luego entonces, la oferta de trabajo debe considerarse de buena fe … por lo anteriormente expuesto … opera la reversión de la carga de la prueba, le corresponde a la actora acreditar el injustificado despido del que se duele …"

La determinación a que arribó la responsable es jurídicamente incorrecta, por lo que enseguida se expone.

El artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo dispone:

"Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo."

El numeral en comento define el concepto de salario, mismo que hace referencia al que ordinaria y sistemáticamente percibe el empleado como contraprestación por su trabajo.

En la especie, se destaca que si bien ********** adujo que devengó como último salario diario el de $ ********** **********, lo cierto es que el mismo no correspondía al ordinario, sino únicamente al estipendio diario identificado con la "Clave: 01" y el concepto denominado: "Sueldo".

Lo anterior se corrobora con las pruebas que ofreció **********, consistentes en treinta y dos recibos de pago correspondientes a los periodos del uno (1) de septiembre de dos mil cuatro (2004) al quince (15) de febrero de dos mil seis (2006), mismos que benefician al actor a la luz del principio jurídico de adquisición procesal, dado que de todas y cada una de estas documentales se advierte que, además de los conceptos relativos a sueldo ("clave: 01"), prima dominical ("clave: 08") y crédito al salario ("clave: 12"), el operario también percibía ordinariamente un bono de transporte ("clave 42").

Para efectos ilustrativos, se destacan los recibos de pago correspondientes a la segunda quincena de enero, así como primera y segunda de febrero

de dos mil seis (2006), contemporáneas al despido aducido de cinco (5) de marzo del mismo año, de los que se desprende similarmente:

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	IMPORTE
01	15	SUELDO	**********
08	2	P. DOMINICAL EXENTA	**********
12	1	CRÉDITO AL SALARIO	**********
42	15	BONO DE TRANSPORTE	**********

De lo anterior, se desprende que el actor efectivamente percibía un sueldo por $ **********, mismo que dividido entre quince, arroja el referido en la impetración laboral por $ **********; y si bien, dicha cantidad no fue controvertida por **********, sociedad anónima de capital variable, lo cierto es que el ofrecimiento de trabajo no sólo debe ceñirse a la litis generada con la demanda y contestación, dado que –la citada oferta– no constituye una excepción y, por ende, la Junta tiene que interpretarla a la luz de las circunstancias que rodean al hecho e, incluso, a las condiciones en que el operario realmente prestaba sus servicios y que se puedan advertir tanto de la propia demanda y contestación, como de las constancia que obren en el sumario.

En ese sentido, no puede soslayarse lo que establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que salario es el que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al empleado por su trabajo.

En relación con ello, debe acentuarse que si bien es cierto ********** ofreció el empleo con el mismo salario base (identificado sólo con el concepto de "sueldo" - "clave: 01") por $ ********** ********** diarios, no menos cierto es que omitió ofrecerle el trabajo con el bono de transporte ("clave: 42"), que también percibía ********** de manera ordinaria y sistemática como contraprestación por su trabajo por la cantidad de $ **********, quincena a quincena, tal como se desprende de los talones de pago precitados.

Como corolario de lo antes expuesto, debe concluirse que el ofrecimiento del trabajo es una manifestación que hace el patrón para que la relación laboral continúe, de tal manera que esta figura sui géneris no tiende a destruir la acción y, por ende, de ningún modo reviste la característica de una excepción; por ende, su valoración no debe circunscribirse sólo a la litis generada con la demanda y contestación, sino tiene que interpretarse íntegramente con las

constancias del expediente, la conducta procesal de las partes y todas las circunstancias que permitan concluir si se realizó de buena fe. En consecuencia, si el trabajador manifiesta un salario que el patrón acepta al contestar la demanda y con éste se ofrece el empleo, pero de autos queda demostrado que además de ese estipendio también percibía alguna otra remuneración en forma ordinaria y sistemática como contraprestación por su labor, entonces ello implica mala fe, aun cuando el actor hubiere omitido enunciar esa retribución adicional en su demanda, pues la patronal debe proponer la reincorporación bajo las condiciones reales en que se desempeñaba la relación laboral, mismas que son de su conocimiento pleno.

En consecuencia, el empleo ofrecido en los términos apuntados ********** modificó las condiciones en que lo venía desempeñando ********** en cuanto al salario que ordinariamente percibía y, por ende, afectó sus derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo (artículo 84), siendo incorrecta la determinación de la Junta al calificar de buena fe la oferta de trabajo y de revertir la carga de la prueba del despido al operario; por tanto, la Junta dictó un laudo violatorio del principio de congruencia consagrado en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí lo fundado de los motivos de disenso.

En tal virtud, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, para el efecto de que:

I. La Junta responsable deje insubsistente el laudo impugnado.

II. Dicte otra resolución, en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, determine que el ofrecimiento de empleo es de mala fe.

III. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que proceda.

Dados los efectos por los cuales se concede el amparo, es innecesario abordar el examen de los restantes motivos de inconformidad, ya que en éstos se plantean cuestiones atinentes a la calificativa del ofrecimiento de empleo.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 107, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 85, que estatuye:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.—Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo

resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del tres siguiente, requiérase a la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, por conducto de su presidente, para que en el término de tres días posteriores a la fecha de notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria, con el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de **********, que es el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que a la fecha es de $ ********** diarios y se multiplica por cien, multa mínima que se considera procede de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley invocada.

Por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 76, 77, 170, 184 y 188 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistente en el laudo de veintidós de enero de dos mil catorce, pronunciado en el expediente laboral **********, seguido por el quejoso, contra ********** y otra. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, en sesión pública, por mayoría de votos de los Magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y José Manuel Hernández Saldaña, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fue ponente el segundo de los nombrados. El Magistrado Héctor Landa Razo emitió voto particular que se plasma al final de esta ejecutoria.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular del Magistrado Héctor Landa Razo: Disiento del criterio sostenido por la mayoría, en lo relativo a conceder la protección constitucional a **********, bajo el razonamiento de que el ofrecimiento de trabajo hecho por la parte demandada es de mala fe, en razón de las siguientes consideraciones.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en tratándose de la figura del ofrecimiento del trabajo, que su calificación de buena o mala fe se determina analizando los antecedentes del caso, la conducta de las partes y las circunstancias relativas, de tal manera que habrá buena fe cuando aquellas situaciones permitan concluir que la oferta revela la intención del patrón de continuar la relación de trabajo y, por el contrario, existirá mala fe cuando el patrón intenta burlar la norma que le impone la carga de probar la justificación del despido; de ahí que deban atenderse las condiciones y actitudes de las partes que puedan influir en esa calificación.—Es decir, para calificar de buena o mala fe la proposición para continuar la relación laboral, deben tomarse en consideración las condiciones fundamentales de ésta, como son el puesto, el salario y la jornada u horario de labores, y que será de buena fe cuando se advierta clara intención de ello, al no afectar los derechos del trabajador y ofrecerse en los mismos o mejores términos de los ya pactados, términos que pueden señalarse expresamente o deducirse del contenido del escrito de demanda o su contestación.—Esto es, el actor, en los hechos relató que se le asignó la categoría de "**********", con una jornada de labores de 6:00 a 18:00 horas de martes a domingo y que devengó como último salario diario el de $ **********, sin aducir que recibiera algún otro concepto como parte integrante de su ingreso económico.—En su contestación del escrito inicial, el demandado, al realizar el ofrecimiento de trabajo, refirió: "… a su disposición el puesto que venía desempeñando en los mismos términos y condiciones en que lo ha venido haciendo, más los aumentos y mejoras que por ley se decreten al mismo y que son los siguientes … b) Puesto o categoría: jefe de piso.—b) (sic) Salario diario: $ **********.—c) Jornada de labores: De las 6:00 a las 14:00 horas de martes a domingo …".—Sobre dicho ofrecimiento de trabajo, la Junta, en el laudo que se impugna, se pronunció de la manera siguiente: "… lo ofrece con la categoría de jefe de piso, un salario de $ **********, condiciones de trabajo afirmadas por la actora y una jornada de 6:00 a 14:00 horas de martes a domingo con 30 minutos para tomar alimentos dentro de las instalaciones de la demandada que desde luego resulta legal, luego entonces, la oferta de trabajo debe considerarse de buena fe … por lo anteriormente expuesto … opera la reversión de la carga de la prueba, le corresponde a la actora acreditar el injustificado despido del que se duele …".—De lo transcrito, se observa que la demandada, al ofrecer el trabajo, lo hizo con la misma categoría (jefe de piso) que señaló el actor, el mismo salario con uno diario de $ **********, idéntico al que dijo el trabajador, con una jornada laboral mejor a la que dijo (de 6:00 a 14:00 horas de martes a domingo), esto, en los mismos términos y condiciones, más los aumentos y mejoras de ley.—En relación con el tema que nos ocupa, la Junta, al dictar el laudo, estimó que el ofrecimiento de trabajo fue de buena fe; lo cual fue correcto.—Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes; la litis al establecer el tema a analizar, tiene que atender los puntos de controversia para llegar a la verdad, atendiendo a lo establecido por el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: "Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.".—En la especie, se dice que al no existir controversia no hay litis, esto es, el puesto que señaló el actor fue el mismo que el demandado ofreció (**********); la jornada laboral que dijo el trabajador era de 6:00 a 18:00 horas de martes a domingo, el patrón la mejoró ofreciéndola de 6:00 a 14:00 horas de martes a domingo; por lo tanto, respecto a estos dos elementos, el patrón no tenía que pro-

bar nada y al no observar puntos de discusión, como se dijo, no hay litis.—Ahora, en la parte del salario, el patrón al ofrecer el trabajo lo hizo con el salario diario que adujo el trabajador que era de $ **********, lo cual, inclusive, se corrobora con las pruebas que ofreció el mismo, consistentes en treinta y dos recibos de pago; de ellos se advierte que el actor percibía un sueldo quincenal de $ **********, mismo que dividido entre quince arroja el referido a la impetración laboral por $ ********** diarios; y al ser materia del juicio el salario diario y no el salario quincenal no hay puntos de discusión al respecto. Esto es así, porque aun cuando en el juicio se probó la existencia del bono de transporte de $ ********** **********; en principio, debe señalarse que el actor nada dijo de éste en su demanda; por lo que está fuera de la litis; pero sobre todo que, en la especie, lo aducido por las partes fue el salario diario, no lo que recibía quincenalmente, en donde se incluía esta prestación (bono de transporte); amén de que al proponerse el empleo en las mismas condiciones que prevaleció hasta el día en que se dijo despedido, significa que este concepto estaba incluido.—Entonces, tenemos que la litis únicamente debe atender a los puntos de controversia y al no existir debate respecto al salario, la categoría ni la jornada y ofrecer el trabajo bajo los mismos términos y condiciones, más los incrementos de ley, no existen puntos que conduzcan a estimar de mala fe la propuesta.—En ese sentido, considero que la oferta de trabajo se realizó de buena fe y fue correcta la determinación de la Junta, por lo que es infundado lo argüido por el quejoso y lo procedente era negar el amparo solicitado.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI EL TRABAJADOR PRECISA UN SALARIO QUE EL PATRÓN ACEPTA Y OFRECE EN SU CONTESTACIÓN, PERO DE AUTOS QUEDA DEMOSTRADO QUE AQUÉL PERCIBÍA CIERTA REMUNERACIÓN ADICIONAL EN FORMA ORDINARIA. El ofrecimiento de trabajo es una manifestación que hace el patrón para que la relación laboral continúe, de manera que esta figura sui géneris no tiende a destruir la acción y, por ende, de ningún modo reviste la característica de una excepción; por ende, su valoración no debe circunscribirse sólo a la litis generada con la demanda y su contestación, sino que tiene que interpretarse íntegramente con las constancias del expediente, la conducta procesal de las partes y todas las circunstancias que permitan concluir si se realizó de buena fe. En consecuencia, si el trabajador manifiesta un salario que el patrón acepta al contestar la demanda y con éste se ofrece el empleo, pero de autos queda demostrado que, además de ese estipendio, también percibía alguna otra remuneración en forma ordinaria y sistemática como contraprestación por su labor, entonces ello implica mala fe, aun cuando el actor hubiere omitido enunciar esa

retribución adicional en su demanda, pues la patronal debe proponer la reincorporación bajo las condiciones reales en que se desempeñaba la relación laboral, las que son de su pleno conocimiento.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.T.117 L (10a.)

Amparo directo 1364/2014. 22 de enero de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Héctor Landa Razo. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Omar David Ureña Calixto.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA). La resolución que confirma la negativa de la orden de aprehensión con efectos de sobreseimiento por prescripción de la pretensión punitiva del Ministerio Público, tiene por efecto impedir que éste pueda allegarse de nuevos datos suficientes, para que con esta aportación se proceda contra el inculpado y, por ello, debe estimarse que el proceso penal no es susceptible de reanudarse y, por ende, que ha concluido. En consecuencia, contra dicha determinación procede el juicio de amparo directo, de conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tratarse de una resolución que pone fin al proceso penal. Sin que sea obstáculo para lo anterior que la última parte del artículo citado prevea expresamente que: "Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional", y que conforme al artículo décimo transitorio de la propia ley, las referencias que en ésta se hagan respecto del "auto de vinculación a proceso" le serán aplicables a los autos de formal prisión en aquellos órdenes normativos donde aún no haya entrado en vigor el sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. Lo anterior, en virtud de que la disparidad entre los principios y las reglas que rigen en el sistema penal acusatorio y el sistema mixto (actual), así como la naturaleza y los efectos que producen los autos de vinculación a proceso y de formal prisión, impiden que estos dos actos sean equiparados. De ahí que tratándose de asuntos tramitados conforme al sistema penal mixto, sea inaplicable la parte *in fine* del invocado artículo 170, fracción I y, por ende, que

en estos casos, para efectos del juicio de amparo en materia penal, el proceso inicie con el auto de radicación.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.
(V Región)5o. 18 P (10a.)

Amparo directo 1346/2014 (cuaderno auxiliar 135/2015) del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con apoyo del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 5 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Rodríguez. Secretaria: Ana Cecilia Morales Ahumada.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

P

PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. En el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el legislador identificó a los sujetos cuyos actos son impugnables en el juicio constitucional: la autoridad responsable y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. De modo que, será autoridad aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; mientras que para determinar la procedencia del amparo contra actos de particulares se atenderá a que éstos sean equivalentes a los de autoridad en aquellas características. Ahora bien, un partido político es un ente de interés público conforme al artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, desde ese ámbito, despliega acciones u omisiones en ejercicio de sus facultades en relación con su organización, sus funciones y las prerrogativas relacionadas con su objeto vinculado a la materia electoral, reguladas por disposiciones constitucionales y legales especiales; por ende, cuando se le reclaman acciones u omisiones desplegadas desde aquel ámbito sui géneris, sus actos no emanan de un plano de supra a subordinación frente a los particulares, ni crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; de ahí que no puedan impugnarse en el juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.77 K (10a.)

Queja 262/2014. Norma Madero Jiménez alias Norma Madero de Paredes. 18 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.A.5 K (10a.)

Amparo directo 12/2015. Maritza Careaga Ramírez. 3 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Manuel Gómez Núñez, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, de conformidad con los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Mauricio Fernando Villaseñor Sandoval.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIÓN ANUAL DE VEJEZ. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA BÁSICA MENSUAL E INCREMENTOS ANUALES, DEBE ATENDERSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167 DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL. Conforme al contenido de dicho numeral, la cuantía básica anual de la pensión, así como el porcentaje de incrementos anuales se deben aplicar al salario que corresponda al promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, siempre y cuando no exceda el límite establecido en el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social, el cual deberá expresarse en veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, para poder saber qué porcentaje corresponderá de cuantía básica y cuánto de incremento anual; ello mediante una división, es decir, salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización / salario mínimo general para el Distrito Federal al momento de la jubilación= ubicación en la tabla de porcentajes. También se debe establecer si el actor tiene derecho a algún incremento anual, y para poder determinar cuántos incrementos anuales le corresponden a un jubilado, basta restar 500 semanas al número de semanas reconocidas; materializado lo anterior, se obtendría la siguiente fórmula: Semanas reconocidas al asegurado - 500 semanas = total semanas; una vez que se sabe cuál es el número de semanas reconocidas, se debe dividir entre 52 (semanas de un año), para obtener el número de incrementos anuales, es decir: Semanas reconocidas / 52= número de incrementos anuales. Puede darse la circunstancia de que el resultado de la anterior operación, tenga fracciones de año o semanas, es decir, 23.11; 25.45; o, 23.79, esas fracciones servirán para poder establecer

si se tiene derecho a alguno de los incrementos a la cuantía básica establecidos en los incisos a) y b), del referido artículo 167, y la forma en la que se materializan esas fracciones de año en semanas, es mediante una simple multiplicación, es decir, la fracción de año por 52 (semanas que tiene un año)= semanas de cotización [artículo 167, incisos a) y b) de la anterior Ley del Seguro Social]. Así, para obtener el monto que corresponda al porcentaje de cuantía básica, al salario diario se le debe aplicar el 13%, es decir, salario diario promedio de las últimas 250 semanas de cotización + 13%= cuantía básica diaria, materializando lo que correspondería mensualmente, bastaría factorizar de la siguiente manera: Cuantía básica diaria x 30= cantidad mensual. Por otra parte, para obtener lo relativo al incremento anual, únicamente hay que aplicarle al salario promedio diario de las últimas 250 semanas de cotización el porcentaje del incremento anual, así como el número de incrementos anuales a los que tenga derecho, y de una interpretación sistemática del aludido artículo 167, este Tribunal Colegiado, estima que el número de incrementos anuales, se deben incorporar al porcentaje de incremento anual de la siguiente forma: Porcentaje de incremento anual (tercera columna de la tabla del artículo 167) x número de incrementos anuales= porcentaje total de incremento anual, razón por la cual, para obtener lo relativo al incremento anual diario, sería en todo caso: Salario promedio diario de las últimas 250 semanas de cotización + porcentaje del incremento anual (ya con el número de incrementos)= incremento anual diario. Y para obtener lo que le correspondería en forma mensual, bastaría con multiplicarlo por 30 (días del mes), es decir, incremento anual diario x 30= incrementos anuales mensuales. Al resultado de esa operación deberá sumarse lo que haya resultado de cuantía básica, más el porcentaje de ayuda asistencial (en caso de que así hubiera procedido), para obtener la pensión mensual que corresponda.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.T.130 L (10a.)

Amparo directo 1654/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 5 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Raúl Santiago Loyola Ordóñez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIONES. SU CUANTÍA DEBE SER PROPORCIONAL A LO QUE CUANTITATIVAMENTE APORTABA EL TRABAJADOR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN FUNCIÓN DE LO QUE REALMENTE SE

LE DESCONTABA PARA EL FONDO RELATIVO Y DEL PORCENTAJE QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA LE CORRESPONDÍA PARA TAL FIN, CON INDEPENDENCIA DE LOS CONCEPTOS O DEL MONTO QUE COMO SUELDO BÁSICO DE COTIZACIÓN APAREZCA EN SU HOJA ÚNICA DE SERVICIOS. En concordancia con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 2a./J. 63/2013 (10a.) y 2a./J. 58/2008, de rubros: "ISSSTE. DISTINCIÓN ENTRE SALARIO TABULAR Y TABULADOR REGIONAL PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)." y "HOJA ÚNICA DE SERVICIOS EXPEDIDA POR LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AGRUPACIONES AFILIADAS DEL ISSSTE. LOS DATOS EN ELLA ASENTADOS NO PUEDEN TOMARSE COMO ÚNICA BASE PARA CALCULAR LA CUOTA DIARIA PENSIONARIA, CUANDO EL TRABAJADOR ADVIERTA ERRORES U OMISIONES EN SU CONTENIDO.", el monto de las pensiones y prestaciones debe ser congruente con las aportaciones y cuotas de seguridad social efectuadas por cuenta de un trabajador, de las que se obtienen los recursos para cubrirlas, y para calcular dichos beneficios no existe obligación de atender sólo a los conceptos y cantidades que aparezcan en la hoja única de servicios cuando el trabajador advierta errores en las cantidades, omisión de alguno de esos conceptos, o datos distintos en los años de servicios. Luego, si un trabajador acredita que se le descontaba determinada cantidad para el fondo de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y dicho descuento, en función del porcentaje de aportaciones que le era aplicable de acuerdo con la ley de la materia vigente en ese momento, lleva a concluir que gozaba de un salario básico de cotización superior al consignado en la hoja única de servicios, es a este último al que debe estar dicho instituto para el cálculo de la pensión, pues sólo así se conseguiría que sea acorde con el monto de las aportaciones referidas, como lo estableció el Alto Tribunal, sin importar que no coincida con lo asentado en la hoja única de servicios.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.2o.A.16 A (10a.)

Amparo directo 686/2014. Lino Ángel Zamora Montiel. 15 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Antonieta Azuela Güitrón. Secretario: Ulises Oswaldo Rivera González.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 63/2013 (10a.) y 2a./J. 58/2008 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, página 774 y Novena Época, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 131, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIONES Y JUBILACIONES. EL DERECHO AL PAGO DE SUS DIFERENCIAS POR INCREMENTOS ES IMPRESCRIPTIBLE. La acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y jubilaciones es imprescriptible, porque el derecho de exigencia comienza día con día mientras aquéllas no se otorguen y se entregue el monto correcto de la pensión actualizada. En ese sentido, la jurisprudencia interna determinó la imprescriptibilidad del derecho al pago de las diferencias pensionarias, en vía de consecuencia de que, si se han cubierto las pensiones y, por tanto, no hay pensiones caídas, entonces en su pago hay un reconocimiento implícito de que también han de pagarse las diferencias por incrementos, toda vez que aquel pago hace improcedente su extinción por el transcurso del tiempo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.A.T.23 L (10a.)

Amparo directo 855/2013. Alfonso Méndez Rivera. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Juan Ramón Barreto López.

Amparo directo 287/2014. Carlos Ávila Ortega. 8 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Luz Elena García Chávez.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 32/2014. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 30 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 44/2014. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 13 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Norma Navarro Orozco, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Edgar Díaz Cortés.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 114/2009, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 644.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. PARA ACREDITAR EL CARÁCTER DE ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO PUEDE PRESENTARSE CÉDULA PROFESIONAL, FEDERAL O ESTATAL, EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE. De acuerdo con el artículo 692, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión; por lo que si un apoderado, a fin de acreditar el carácter con el que se ostenta, exhibe cédula profesional estatal expedida por autoridad competente, en la que consta que cumplió con los requisitos señalados en la ley local respectiva para ejercer la profesión de licenciado en derecho, este documento es suficiente para tener por colmados los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que en ninguna parte de éste se exige que la cédula profesional sólo sea de carácter federal y, por tanto, si esa distinción no la hace la ley, su intérprete tampoco puede hacerla.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.1o.C.T.45 L (10a.)

Amparo directo 952/2014. Ernesto Alonso Ríos Lucero. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretaria: Ana Luisa Ordóñez Serna.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PERSONAS INDÍGENAS. ES INNECESARIO ATENDER A SUS COSTUMBRES, CUANDO SON PARTE EN UN JUICIO QUE INVOLUCRA UN INMUEBLE RESPECTO DEL CUAL PUEDEN EJERCER SUS PRÁCTICAS RESPECTO A LA PROPIEDAD, Y ÉSTE ESTÁ UBICADO FUERA DEL TERRITORIO DE SU COMUNIDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Al estar expresamente regulado lo relativo a la propiedad, no se impone atender a las costumbres de los pueblos cuando la persona indígena es parte en un juicio que involucra inmuebles que no se encuentran dentro de su comunidad, sobre los cuales puedan ejercer sus prácticas respecto a la propiedad, en virtud de que la constitución y extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles deben ser conforme al derecho que rige en el lugar en que se ubiquen, de acuerdo con el artículo 13 del Código Civil para el Distrito Federal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.219 C (10a.)

Amparo directo 188/2014. Cristina Santana González. 20 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Adolfo Almazán Lara.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA QUE PROCEDA LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DERIVADA DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, DEBE NOTIFICARSE A LA SECCIÓN SINDICAL CORRESPONDIENTE CON 3 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A SU APLICACIÓN (CLÁUSULA 24 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO). Si al contestar la demanda Petróleos Mexicanos se excepciona en el sentido de que llevó a cabo una investigación administrativa en términos de la cláusula 24 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con su sindicato de trabajadores, debe demostrar los presupuestos de su excepción, entre ellos, haber comunicado a la sección sindical correspondiente con 3 días hábiles de anticipación a la rescisión del contrato de trabajo del operario, informándole las razones de esa determinación y los fundamentos legales en que la apoya, por lo que la observancia de dicha cláusula no está sujeta al arbitrio de las partes, ya que, de lo contrario, se perjudicarían los intereses de quienes son los representados por los signantes del pacto colectivo el cual, una vez suscrito, adquiere carácter imperativo y obligatorio, tanto para quienes lo suscribieron como para los que fueron representados al firmarlo, de manera que su cumplimiento engendra también el derecho de impedir actos arbitrarios del patrón; lo anterior, con independencia de que el sindicato no exprese inconformidad alguna en ese sentido, porque del análisis de la citada cláusula se infiere que no exime a la empresa de cumplir con lo ahí establecido. Por tanto, debe ceñirse a lo pactado, pues de no hacerlo, se generaría una transgresión al pacto contractual, en cuanto establece ese requisito para hacer procedente la rescisión derivada de un acta de investigación administrativa.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.T.43 L (10a.)

Amparo directo 1639/2014. Petróleos Mexicanos. 4 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adolfo O. Aragón Mendía. Secretario: Francisco Ernesto Orozco Vera.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA. El Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, Jalisco, fue elaborado, proyectado y aprobado en términos de las facultades –y obligaciones– con que cuentan las autoridades municipales, inmersas en los artículos 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción III y 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3o., 10 y 138 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Por su parte, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que la sociedad y el Estado se encuentran interesados en la realización de las actividades municipales en esa materia para el bienestar colectivo, a más de que la finalidad de la elaboración de dicho plan es la de ordenar los asentamientos humanos y establecer medidas adecuadas, usos y reservas para el debido ordenamiento territorial, a efecto de planear y regular el crecimiento de los centros de población. En consecuencia, es improcedente conceder la suspensión provisional en el amparo contra el plan mencionado, pues con esa medida se privaría al Municipio del ejercicio de sus facultades para realizar las tareas en materia de urbanismo y planificación, así como las obligaciones correlativas, en detrimento de la sociedad y del propio nivel de gobierno, contenidas en las normas constitucionales y legales invocadas, es decir, se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.62 A (10a.)

Queja 53/2015. Asociación de Colonos Vallarta Poniente, A.C. y otros. 2 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De la interpretación de los artículos 2553 y 2554 del Código Civil Federal, así como 2447 y 2448 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, de contenido prácticamente idéntico, se colige que no se establece gradación o

jerarquía en los poderes generales, sino que, primero, dichos preceptos refieren la existencia de poderes generales o limitados, atendiendo a si abarcan una representación en cualquier supuesto o sólo para algunos especificados en el propio poder y, después, en diversa clasificación indican que existen tres categorías: de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas, las cuales tienen distinta naturaleza y objeto, pues se emplean para casos diferentes. Además, conforme a los artículos 2546 y 2562 del Código Civil Federal y sus correlativos 2440 y 2456 del Código Civil local, el mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar, por cuenta del mandante, los actos jurídicos que éste le encarga y, en el desempeño de su encargo se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante, por lo que existe un régimen de menciones expresas, en tanto que es, precisamente por disposición de la ley o por las cláusulas plasmadas en la convención, que se advierten los alcances particulares de cada poder. Así, no existe una gradación o jerarquía, por el hecho de que la ley no la reconoce ni establece; de ahí que en un régimen de menciones expresas, no puede inferirse a manera de presunciones, una extensión de facultades conferidas en un mandato, sino que el mandatario debe estar investido de aquéllas por disposición de la ley o por cláusula expresa del mandante, para que a nombre de éste y bajo las instrucciones dadas realice ciertos actos. Por tanto, para que en el Estado de Nuevo León un mandatario con poder para actos de administración pueda promover juicio de amparo en representación de su mandante, que es una facultad propia del diverso mandato para pleitos y cobranzas, es indispensable una cláusula que expresamente la consigne. Máxime porque no se trata de actividades análogas, de forma que quien administra no realiza una labor similar a quien controvierte actos y cobra, por lo que no podría hablarse de alguna implicación, como podría suceder, verbigracia, con el apoderado con facultades de dominio, que debe conducirse como dueño y defender un bien, pues es por disposición expresa de la ley, que los alcances de su poder conllevan mayores facultades.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.81 K (10a.)

Queja 330/2014. Desarrollos Inmobiliarios Celom, S. de R.L. de C.V. y otra. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretario: Jesús Alejandro Jiménez Álvarez.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

POSESIÓN DE UNIFORMES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FALSIFICADOS. EL ARTÍCULO 250 BIS 1, FRAC-

CIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ DICHO DELITO NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. El artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de exacta aplicación de la ley en materia penal, al establecer que en los juicios de ese orden queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Ahora bien, el artículo 250 bis 1, fracción I, del Código Penal Federal que prevé el ilícito de posesión de uniformes de cualquier institución de seguridad pública falsificados, no vulnera dicho derecho fundamental, pues de su lectura se advierte en qué consiste la conducta delictiva motivo del hecho imputado y establece la sanción aplicable; asimismo, en su último párrafo, dispone que se entiende por "uniformes" aquellos que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en instituciones de seguridad pública o procuración de justicia, los señalados en las disposiciones aplicables para éstas; además, refiere que sólo se considerarán auténticos los uniformes que sean adquiridos, distribuidos o enajenados por personas autorizadas para ello o a quienes se les haya adjudicado el contrato respectivo por la institución competente, conforme a las disposiciones aplicables.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.78 P (10a.)

Amparo directo 417/2014. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María Imelda Ayala Miranda.

Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PREFERENCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. A EFECTO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTORIO DE LA ACCIÓN, ES INSUFICIENTE ACREDITAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE QUIEN SE LE ASIGNÓ EL PUESTO DEMANDADO.

AMPARO DIRECTO 1137/2014. 15 DE ENERO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: ALETHIA GUERRERO SILVA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—El quejoso en su concepto de violación se duele de la determinación de la autoridad responsable para absolver a las demandadas de las prestaciones reclamadas, al estimar procedente la excepción de prescripción opuesta por Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica, así como el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y su Sección 46, opuesta con base en lo establecido en el artículo 518 de la ley laboral, en cuanto a que la plaza que el actor reclamó se otorgó al trabajador **********, previa solicitud de la empresa de **********, el trabajador fue contratado el ********** siguiente y el actor presentó su demanda hasta el **********, cuando había transcurrido en exceso el término de dos meses a que se refiere el precepto invocado y, en consecuencia, su acción se encontraba prescrita.

Al respecto, aduce que no existe constancia de que se haya dado publicidad adecuada y fehaciente a la propuesta formulada a favor de **********; pues si bien las patronales demandadas ofrecieron la propuesta sindical como se advierte en su escrito probatorio en la documental II a), (sic) ello no es suficiente para que la Junta tuviera por demostrado que el actor tenía conocimiento de tal acontecimiento, pues se trata de un documento elaborado de manera unilateral por las demandadas; por lo tanto, no puede decirse que es de carácter público y notorio para el actor; además, tampoco existe prueba idónea con la que se acreditara que se haya publicado la propuesta formulada en el tablero de avisos que tiene para tal efecto la representación sindical.

Afirma que también respecto a la tarjeta de trabajo ********** ofrecida por las empresas demandadas bajo el apartado II, inciso c), de su escrito probatorio, consta que la plaza reclamada fue otorgada a dicho trabajador el **********; lo cual tampoco es prueba idónea para que la Junta tuviera por demostrado que el actor tenía conocimiento, pues se trata de un documento elaborado de manera unilateral por las demandadas; por lo tanto, no puede decirse que es de carácter público y notorio para el actor.

Es fundado el concepto de violación.

El capítulo IV de la Ley Federal del Trabajo (artículos 154, 155, 156, 157, 158 y 159), regula lo relativo a los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso de los trabajadores.

Del análisis de los anteriores artículos se observa que el 154 contiene una obligación de dar preferencia a determinada clase de trabajadores mexicanos respecto de extranjeros; de aquellos que hayan prestado servicios satisfactoriamente por mayor tiempo respecto de los que no estén en esas condiciones y de los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Esta obligación no existe para el patrón cuando haya celebrado un contrato colectivo en el que se incluya la cláusula de exclusión por admisión, ya que el propio patrón ha perdido la libertad para designar a su personal y es el sindicato respectivo el que tiene derecho de proponer a las personas que, cumpliendo los requisitos contractuales correspondientes, tendrá que contratar el citado patrón.

El artículo 155 establece que los trabajadores que se encuentren en los casos del 154 y que aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, por reunir los requisitos a que tal precepto se refiere, deberán presentar una solicitud a la empresa o establecimiento, indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y quiénes dependen económicamente de ellos, si prestaron servicios con anterioridad y por cuanto tiempo, naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato a que pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse algún puesto nuevo; e, igualmente, la disposición que se comenta agrega que, a falta de la solicitud previa mencionada en primer término, el aspirante puede presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funde su solicitud y, con ello, da dos posibilidades a fin de que los aspirantes puedan ser llamados a ocupar la vacante: La solicitud en que consten los datos aludidos, que puede presentarse en cualquier tiempo, antes que la vacante ocurra, o bien, en el momento que esto último suceda pueda presentarse personalmente a solicitarla, aduciendo el fundamento de su pretensión. El cumplimiento de cualquiera de los dos requisitos anteriores debe ser considerado como un elemento básico para la procedibilidad de la acción consignada en el artículo 157 de la misma ley laboral.

El numeral 156 dispone que, de no existir contrato colectivo, o no contener el celebrado la cláusula de admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 154 a los trabajadores que se ubican en el supuesto que ahí se consigna.

El 157 otorga a los trabajadores que se consideran postergados en sus derechos de preferencia, derivados de los artículos 154 y 156 del mismo ordenamiento, dos acciones ejercitables a elección del trabajador afectado: la

de otorgamiento del puesto reclamado o la de indemnización consistente en el importe de tres meses de los salarios que correspondan al puesto. En cualquiera de los dos casos, la procedencia de la acción intentada da derecho, además, al pago por concepto de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la postergación hasta la del cumplimiento del laudo.

El artículo 158 otorga el derecho a los trabajadores de planta, y los mencionados en el artículo 156, a que en cada empresa o establecimiento se determine su antigüedad.

Distinguiendo a los trabajadores que regula el artículo 156 que no tienen el carácter de planta, el diverso precepto 159 de la misma ley laboral establece las reglas para los ascensos de los trabajadores de planta que pretenden el derecho para ocupar la vacante definitiva de un puesto de categoría superior.

Como se observa, los artículos 154, 155, 156 y 157 de la Ley Federal del Trabajo establecen las reglas sobre el derecho de los trabajadores que no tienen el carácter de planta para ocupar los puestos vacantes o de nueva creación y el artículo 159 establece las reglas en cuanto al derecho de los trabajadores de planta que pertenezcan al escalafón.

Por otro lado, el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente:

"Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo.

"La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación."

La otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación distinguió, para efectos de la prescripción, a los trabajadores que ejercitan sus derechos de preferencia en términos de los artículos 154, 155, 156 y 157 de la Ley Federal del Trabajo, de los que se ubican en el artículo 159 de la misma ley, emitiendo criterio en el sentido de que el término al que debe sujetarse la prescripción de las acciones consignadas en el artículo 157 es de dos meses, porque si bien es cierto que las acciones de preferencia que se estudian no están señaladas expresamente en el invocado artículo 518 y que, por ello, se pudieran encontrar sujetas a la norma general consignada en el artículo 516, que es de un año, también lo es que las mencionadas acciones de prefe-

rencia guardan una estrecha analogía con las acciones ejercitadas en el caso de despido del trabajador; ambas tienen la misma naturaleza jurídica y tienden a la protección del obrero en cuanto a su estabilidad en el empleo y la conservación de los derechos derivados del mismo y, en tal virtud, si existe la misma *ratio legis* en ambas acciones, les debe ser aplicada también la misma disposición reguladora, esto es, que el término de prescripción debe ser el de dos meses contenido en el artículo 518 ya invocado, dado que el incumplimiento por parte del patrón o del sindicato del derecho preferente del trabajador afectado, da derecho a reclamar el otorgamiento de la plaza o el pago de la indemnización como si hubiera sido despedido.

Dicho criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 343, visible en la página 228, Tomo V, Parte SCJN del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, Séptima Época, que textualmente dice lo siguiente:

"PREFERENCIA, DERECHO DE. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPECTIVA. El artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 otorga a los trabajadores que se consideran postergados en sus derechos de preferencia derivados de los artículos 154 y 156 del mismo ordenamiento, dos acciones ejercitables a elección del trabajador afectado, la del otorgamiento del puesto reclamado o la de indemnización consistente en el importe de tres meses de los salarios que correspondan al puesto. En cualquiera de los dos casos, la procedencia de la acción intentada, cualquiera que ella sea, da derecho, además, al pago, por concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la postergación hasta la del cumplimiento del laudo condenatorio. Estas acciones guardan una estrecha analogía con las consignadas en la fracción XXII del apartado A del artículo 123 de la Constitución y en la reglamentación de dicho precepto constitucional, desarrollada en el artículo 48 de la ley reglamentaria. Ahora bien, las acciones motivadas por el despido del trabajador a que estas últimas disposiciones se refieren, sea la de indemnización o la de cumplimiento del contrato o relación de trabajo, tienen señalado, para su ejercicio, un término de prescripción de dos meses, según lo dispone el artículo 518 del ordenamiento laboral. En estas condiciones cabe concluir que el término a que debe sujetarse la prescripción de las acciones consignadas en el artículo 157, es igualmente de dos meses, porque si bien es cierto que las acciones de preferencia que se estudian no están señaladas expresamente en el invocado artículo 518 y que, por ello, se pudieran encontrar sujetas a la norma general consignada en el artículo 516, que es de un año, también lo es que las mencionadas acciones de preferencia, según se ha indicado antes, guardan una estrecha analogía con las acciones ejercitables en el caso de despido del trabajador; ambas tienen la misma

naturaleza jurídica y tienden a la protección del obrero en cuanto a la estabilidad en el empleo y la conservación de los derechos derivados del mismo y, en tal virtud, si existe la misma '*ratio legis*' en ambas acciones, les debe ser aplicada también la misma disposición reguladora, esto es, que el término de prescripción debe ser el de dos meses contenido en el artículo 518 ya indicado. La conclusión a que se llega deriva de que el legislador considera que las acciones consignadas en la fracción XXII del apartado A del artículo 123 constitucional, tienen por objeto la reclamación del puesto del que el trabajador ha sido despedido, para que pueda seguir percibiendo el salario que constituye el medio de subsistencia de la familia obrera o bien para que el trabajador obtenga la indemnización correspondiente y esté en aptitud de prestar sus servicios a otro patrón o ejercer la actividad que estime conveniente. En ambos casos, el legislador laboral estimó, con la disposición del artículo 518, que la reclamación debe hacerse dentro de un término de dos meses contado a partir del día siguiente a la fecha en que ocurra la separación del trabajador, y si no lo hace dentro del término indicado, considera que el propio trabajador afectado con el despido o separación carece del interés jurídico para hacer la reclamación. Las mismas consideraciones son valederas no solamente por analogía sino aun por mayoría de razón, en el caso de las acciones consignadas en el artículo 157, ya que el trabajador que se encuentra comprendido en las hipótesis a que se refieren los artículos 154 y 156, esto es, que se considera con derecho a ocupar la vacante o puesto de nueva creación en la empresa, tiene las mismas necesidades vitales del trabajador que ha sido despedido. Por otra parte, es de agregarse que la situación jurídica que se produce en la empresa o establecimiento con motivo de presentarse la vacante o crearse un puesto nuevo, debe resolverse de inmediato debiendo quedar protegida dicha situación con firmeza y seguridad jurídica en beneficio de todos los factores de la producción, esto es del patrón, del sindicato que esté facultado con exclusividad para hacer proposiciones, del trabajador que ya ocupa el puesto reclamado, y del aspirante que promueve el juicio. Los razonamientos invocados coinciden substancialmente con los que fueron esgrimidos por esta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la determinación del criterio que se encuentra en la jurisprudencia que con el número 183 aparece visible en la página 178 del Tomo correspondiente a esta Cuarta Sala del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* de 1975, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 'Conforme al artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, es obligación a cargo del patrón prorrogar el contrato de trabajo por todo el tiempo que subsistan las causas que le dieron origen, de tal manera que si no cumple con esta obligación su actitud debe equipararse a la de un despido, porque con esta actuación se impide que el trabajador continúe desarrollando normalmente sus labores. El término de prescripción para el ejercicio de la acción correspondiente, es de dos meses, conforme a lo establecido

en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo y no de un año como lo establece el artículo 516 de la misma ley'. Las anteriores argumentaciones llevan a la conclusión que debe quedar sin efecto, por interrupción, la tesis jurisprudencial 170 visible en la página 165 del Tomo correspondiente a esta Cuarta Sala del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* de 1975. Por lo expuesto, esta Sala considera que el término a que debe sujetarse la prescripción de las acciones consignadas en el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo es de dos meses, por guardar una estrecha analogía con las acciones ejercitadas en el caso del despido del trabajador."

Al respecto, la jurisprudencia sin número de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 103-108, Quinta Parte, materia laboral, página 113, ha establecido lo siguiente:

"PREFERENCIA, DERECHO DE. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA. El momento en que comienza a correr la prescripción de las acciones de preferencia de derechos contenidas en el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo, es a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, según lo dispone el artículo 516 que contiene la norma general en esta materia. Ahora bien, el cómputo del término respectivo debe comenzar a correr desde el momento en que el trabajador conoce la postergación de que ha sido objeto y que constituye la base de la acción ejercitada. La ley laboral ha establecido diversas normas que tienen que conjugarse para determinar el momento en que, jurídicamente, se puede determinar que el trabajador postergado conoce, o debe conocer, en forma objetiva, la violación de su derecho. Dispone el artículo 132 lo siguiente: 'Son obligaciones de los patrones: XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse'. Si el patrón cumple de manera adecuada y fehaciente con el precepto que se transcribe, es indudable que el trabajador aspirante a ocupar el puesto que solicita tiene o debe tener conocimiento de dicha circunstancia, por lo que, el término de prescripción deberá contar desde el día siguiente a la fecha en que se de cumplimiento al precepto que se cita. Si el patrón no da cumplimiento a la obligación legal transcrita anteriormente y la ocupación del puesto debe hacerse mediante proposición del organismo sindical titular que tenga la facultad exclusiva de hacerlo en virtud de la existencia de un contrato colectivo de trabajo con la cláusula de admisión, el punto de partida para el cómputo del término de prescripción deberá contar a partir del día siguiente al en que la agrupación sindical proponente dé publicidad adecuada y fehacientemente a la proposición o proposiciones que haga en favor de uno o

varios obreros para ocupar una o varias vacantes. Si ninguna de las dos hipótesis anteriores se verifica, el punto de partida para el cómputo del término de la acción de preferencia deberá contar a partir del día siguiente al en que se realiza la ocupación del puesto reclamado, en virtud de que este hecho tiene el carácter de público y notorio en el ámbito de la empresa o establecimiento."

Criterio que establece que el cómputo del término prescriptivo de las acciones de preferencia de derechos contenidas en el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo, es a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, mismo que debe comenzar a correr desde el momento en que el trabajador conoce la postergación de que ha sido objeto y que constituye la base de la acción ejercitada.

Criterio que ha establecido los diversos supuestos para determinar el momento en que, jurídicamente, se puede determinar que el trabajador postergado conoce, o debe conocer, en forma objetiva, la violación de su derecho, siendo éstos los siguientes:

a) El patrón ponga en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse.

b) El día siguiente al en que la agrupación sindical proponente dé publicidad adecuada y fehacientemente a la proposición o proposiciones que haga en favor de uno o varios obreros para ocupar una o varias vacantes.

c) A partir del día siguiente al en que se realiza la ocupación del puesto reclamado, en virtud de que este hecho tiene el carácter de público y notorio en el ámbito de la empresa o establecimiento.

En la especie, ********** demandó de 1. Petróleos Mexicanos, 2. Pemex Petroquímica, 3. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (S.T.P.R.M.) y 4. La Sección 46 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el reconocimiento y declaración del derecho para que se le otorgaran con carácter de planta las plazas que se encontraban vacantes con Nos. ********** y **********, turno rolado, con categoría de **********, **********, en el ********** o como las denominaran las empresas demandadas, o en caso de que las plazas descritas fueran intermedias en el escalafón respectivo, demandó la última plaza del escalafón.

Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica, entre otras excepciones y defensas, opuso la excepción de prescripción, como sigue:

"I. Prescripción, medio extintivo de la acción de que intenta el reclamante en el escrito inicial de demanda, que se opone con fundamento en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo y que se deriva del hecho consistente en que la plaza reclamada se otorgó mediante la solicitud ********** de fecha ********** y la tarjeta de trabajo expedida para formalizar la relación de trabajo contiene la fecha de contratación de **********, por tanto, cualquiera de las mismas que se considere por esa H. Junta como inicio del término de prescripción de dos meses previsto en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, hace procedente la declaratoria de prescripción respecto de la acción intentada, porque la demanda se presentó hasta el **********, cuando había transcurrido en exceso el término descrito."

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y la Sección 46 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, también opusieron la excepción de prescripción en los términos siguientes:

"2. Prescripción. Se opone esta excepción con fundamento en lo dispuesto por el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, la plaza que el actor reclama se otorgó al trabajador **********, previa solicitud de la empresa de fecha **********, y el trabajador fue contratado el ********** y presentó su demanda hasta el **********, cuando había transcurrido con exceso el término de dos meses a que se refiere el precepto invocado y en consecuencia su acción se encuentra prescrita."

La Junta en el laudo, resolvió:

"... en cuanto a la excepción que oponen las también demandadas S.T.P.R.M. y su Sección 46, en su apartado 2 foja 57, y misma que hacen valer con fundamento en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que la plaza que el actor reclama, se otorgó al trabajador **********, previa solicitud de la empresa de fecha **********; y el trabajador fue contratado el ********** y presentó su demanda hasta el **********, cuando había transcurrido con exceso el término de dos meses a que se refiere el precepto invocado y en consecuencia su acción se encuentra prescrita ... las demandadas que invocan la excepción a estudio, en actuaciones a foja 105 aparece la tarjeta de trabajo para puesto sindicalizado número **********, misma que fue ofrecida en copia certificada, haciendo las veces de original, motivo por el cual se le otorga valor probatorio, ya que el personal correspondiente investido de fe pública tuvo a la vista el original del mismo, corroborando que el que obra en autos es copia fiel de su auténtico; tarjeta de trabajo que se encuentra expedida por Petróleos Mexicanos a favor de ********** y con la cual quedó por cierto que la categoría de **********, en el Complejo

Petroquímico Independencia, en el departamento de vigilancia, plaza número **********, mismo que pretende el hoy accionante, esto es el puesto reclamado: fue ocupado por **********, en forma definitiva a partir del día **********; por lo que a la fecha de presentación del escrito inicial de demanda, siendo ésta el día **********, se colige que la acción ejercitada por el hoy actor, se encuentra prescrita en términos de lo señalado en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que evidentemente ha transcurrido en exceso el término prescriptivo de dos meses; resultando aplicable al caso, la jurisprudencia siguiente: 'DERECHOS DE PREFERENCIA. LOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 154, 156 Y 157 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SON DE DIVERSA NATURALEZA A LOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 159 Y, POR ELLO, EL PLAZO PRESCRIPTIVO AL QUE DEBEN SUJETARSE ES DIFERENTE.' (se transcribe y cita precedentes y datos de localización).—Por lo que es de hacer notar, que en el caso concreto, el término prescriptivo, para el presente asunto, comienza o correr a partir del día siguiente al en que ********** ocupó el puesto reclamado en forma definitiva; esto es a partir del día ********** en virtud de ser éste un hecho público y notorio dentro de la empresa; y en este sentido conoce la supuesta postergación de sus derechos el hoy accionante a partir de ese momento, por lo que si presentó su demanda el día **********, como anteriormente se refirió, es por lo que se afirma que transcurrió en exceso el término de dos meses a que se refiere el precepto legal invocado, pues en todo caso tenía hasta el día ********** para ejercer la acción que pretende. Lo que encuentra sustento con la siguiente tesis: 'DERECHO DE PREFERENCIA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJERCITARLO, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER.' (se transcribe y cita precedentes y datos de localización).—Lo anterior, toda vez que en el presente caso la ocupación de la plaza reclamada por **********, inició en fecha **********, lo que se corrobora como anteriormente se señaló con la tarjeta de trabajo para puesto sindicalizado número ********** que obra a foja 105, debiendo iniciar el conteo del término prescriptivo a partir del día siguiente de dicha ocupación, esto es: **********, por lo que el actor tenía hasta el día **********, para ejercitar su acción en relación a que le sea concedida en forma definitiva la categoría de **********, en el Complejo Petroquímico Independencia, en el departamento de **********, plaza número **********, por lo que al haber presentado su escrito de demanda hasta el **********, es indudable que la acción ejercitada por el hoy actor, se encuentra prescrita en términos de lo señalado en el numeral 518 de la ley federal de la materia, en virtud de que ha transcurrido en exceso el término prescriptivo de dos meses.—Por lo anteriormente manifestado y toda vez que la excepción de prescripción opuesta por el S.T.P.R.M. y su Sección 46, resultó procedente; y tomando en consideración el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es que se debe absolver a los demandados Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica,

el S.T.P.R.M. y su Sección 46 del cumplimiento de las prestaciones reclamadas por la actora en su contra, al no haber sido procedentes las acciones intentadas por el demandante. …"

De lo antes transcrito se advierte que la responsable estimó procedente la excepción de prescripción planteada por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y la Sección 46 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, opuesta conforme al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, al estimar que si la ocupación de la plaza reclamada inició en **********, lo que se demostraba con la tarjeta de trabajo para puesto sindicalizado ********** que obra a foja 105, el conteo del término prescriptivo debió iniciar a partir del día siguiente de dicha ocupación, esto es, el **********, por lo que el actor tuvo hasta el **********, para ejercitar su acción; y, al haber presentado su escrito de demanda el **********, la acción ejercitada se encontraba prescrita en términos de lo señalado en el numeral citado, en virtud de que transcurrió en exceso el término prescriptorio de dos meses.

Como se ve, la autoridad responsable estimó para comenzar a contar el plazo prescriptorio, el tercer supuesto enunciado en la jurisprudencia de rubro: "PREFERENCIA, DERECHO DE. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA.", antes citada, esto es, a partir del día siguiente al en que se realizó la ocupación del puesto reclamado, en virtud de que este hecho tiene el carácter de público y notorio en el ámbito de la empresa o establecimiento.

Al respecto, como se dijo, el término prescriptorio de las acciones de preferencia de derechos contenidas en el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo, es a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, que debe comenzar a correr desde el momento en que el trabajador conoce la postergación del derecho. La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 103-108, Quinta Parte, materia laboral, página 113, de rubro: "PREFERENCIA, DERECHO DE. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA.", estableció diversos supuestos para determinar el momento en que el trabajador conoce o debe conocer, en forma objetiva, la violación de su derecho, siendo a partir de que: a) el patrón ponga en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse; b) el día siguiente al en que la agrupación sindical proponente dé publicidad adecuada y fehacientemente a la proposición o proposiciones que haga en

favor de uno o varios obreros para ocupar una o varias vacantes; y, c) a partir del día siguiente al en que se realiza la ocupación del puesto, en virtud de que este hecho tiene el carácter de público y notorio en el ámbito de la empresa o establecimiento. Luego, cuando no se cumplen los dos primeros supuestos, la ocupación de la plaza reclamada debe ser de tal manera pública y notoria que no exista duda que el actor la conoció, lo que no se colma con la comprobación de la suscripción del contrato de quien se le asignó el puesto demandado, pues esta prueba sólo hace fe para constatar la data en que se elaboró o firmó el documento, no que se haya ocupado.

Entonces, ese aspecto no es susceptible de ser probado con la tarjeta de trabajo para el puesto sindicalizado **********, con la que la responsable dijo constaba la ocupación por parte de ********** del puesto reclamado el **********, pues a partir de éste no se advierte que la ocupación haya sido pública y notoria de tal manera que el quejoso forzosamente la haya conocido, ya que según lo afirmó la autoridad, sólo se ve que en esa data se asentó que le fue asignado de manera definitiva el puesto a **********; por lo que, al no obrar constancia que demuestre la data en que el impetrante tuvo conocimiento de la ocupación de la plaza, la Junta debió estimar improcedente la excepción de prescripción opuesta.

En las apuntadas condiciones, ha lugar a conceder el amparo impetrado, para los siguientes efectos:

1) La Junta deje insubsistente el laudo.

2) Dicte otro en el que estime improcedente la excepción de prescripción opuesta por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y la Sección 46 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

3) Resuelva lo que en derecho corresponda.

Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del tres siguiente, requiérase a la Junta Especial Número Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidente, para que en el término de tres días posteriores a la fecha de notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de $********** (**********), que es el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que a la fecha es de $********** (**********) diarios y se multiplica

por cien, multa mínima que se considera procede, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley invocada.

Dados los efectos por los cuales se concede la protección constitucional, es innecesario abordar el examen de los motivos de inconformidad, relativos a la procedencia de la acción entablada.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 107, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo VI, Matera Común, página 85, que estatuye:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

Por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 76, 77, 170, 184 y 188 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto de la Junta Especial Número Doce de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo pronunciado el **********, en el juicio laboral **********, seguido por el quejoso contra Petróleos Mexicanos y otros. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, en sesión pública, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña y Héctor Landa Razo, en contra de la Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos, quien emitió voto particular. Fue ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información

considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular de la Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos: Respetuosa del criterio adoptado, la suscrita considera que fue procedente la prescripción opuesta por Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica, así como por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y su Sección 46, con base en lo establecido en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, por las razones que se exponen: La anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció criterio acerca de que el cómputo del término prescriptivo de las acciones de preferencia de derechos contenidas en el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo comienza a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, el cual debe comenzar a correr desde el momento en que el trabajador conoce la postergación de que ha sido objeto y que constituye la base de la acción ejercitada.—También consideró la existencia de distintas hipótesis a partir de las cuales puede determinarse el momento en que el trabajador postergado conoce o debe conocer, de modo objetivo, la violación de su derecho, lo cual quedó establecido en la jurisprudencia (sin número), consultable en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 103-108, Quinta Parte, página 113, de rubro y texto siguientes: "PREFERENCIA, DERECHO DE. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA.—El momento en que comienza a correr la prescripción de las acciones de preferencia de derechos contenidas en el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo, es a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, según lo dispone el artículo 516 que contiene la norma general en esta materia. Ahora bien, el cómputo del término respectivo debe comenzar a correr desde el momento en que el trabajador conoce la postergación de que ha sido objeto y que constituye la base de la acción ejercitada. La ley laboral ha establecido diversas normas que tienen que conjugarse para determinar el momento en que, jurídicamente, se puede determinar que el trabajador postergado conoce, o debe conocer, en forma objetiva, la violación de su derecho. Dispone el artículo 132 lo siguiente: 'Son obligaciones de los patrones: XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse'. Si el patrón cumple de manera adecuada y fehaciente con el precepto que se transcribe, es indudable que el trabajador aspirante a ocupar el puesto que solicita tiene o debe tener conocimiento de dicha circunstancia, por lo que, el término de prescripción deberá contar desde el día siguiente a la fecha en que se de cumplimiento al precepto que se cita. Si el patrón no da cumplimiento a la obligación legal transcrita anteriormente y la ocupación del puesto debe hacerse mediante proposición del organismo sindical titular que tenga la facultad exclusiva de hacerlo en virtud de la existencia de un contrato colectivo de trabajo con la cláusula de admisión, el punto de partida para el cómputo del término de prescripción deberá contar a partir del día siguiente al en que la agrupación sindical proponente de publicidad adecuada y fehacientemente a la proposición o proposiciones que haga en favor de uno o varios obreros para ocupar una o varias vacantes. Si ninguna de las dos hipótesis anteriores se verifica, el punto de partida para el cómputo del término de la acción de preferencia deberá contar a partir del día siguiente al en que se realiza la ocupación del puesto reclamado, en virtud de que este hecho tiene el carácter de público y notorio en el ámbito de la empresa o establecimiento.".—(Nota: En el *Semanario Judicial de la Federación*, Volúmenes 103-108, página 113, aparece la expresión ... "Son obligaciones de los patrones: IX ... ", la cual

se corrige con el propósito de adecuarla al contenido del criterio, con apoyo en la ley respectiva).—En el caso, ********** demandó de Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Sección 46 de dicho sindicato, el reconocimiento y declaración del derecho para que se le otorgaran con carácter de planta las plazas que se encontraban vacantes con Nos. ********** y ********** turno rolado, con categoría de **********, **********, en el ********** o como las denominaran las empresas demandadas, en el caso de que las plazas descritas fueran intermedias en el escalafón respectivo, demandó la última plaza del escalafón.—Petróleos Mexicanos y Pemex Petroquímica opusieron la prescripción con base en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, que hicieron derivar del hecho consistente en que la plaza reclamada se otorgó mediante solicitud **********, de ********** y la tarjeta de trabajo expedida para formalizar la relación de trabajo contenía fecha de contratación **********, por lo que cualquiera de éstas debía de ser la que considerara la Junta como inicio del término prescriptivo de dos meses, previsto en el numeral en cita y hacía procedente la prescripción de la acción, al haberse presentado la demanda el **********.—El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y su Sección 46 opusieron la excepción de prescripción con base en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, al señalar que la plaza que el actor reclamó se otorgó al trabajador **********, previa solicitud de la empresa, de fecha **********, que el trabajador fue contratado el ********** y el actor presentó su demanda hasta el **********, cuando ya había transcurrido en exceso el término de dos meses a que se refiere el precepto invocado; en consecuencia, la acción se encontraba prescrita.—La responsable declaró procedente la prescripción planteada por las demandadas, en términos del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, porque consideró que la ocupación de la plaza reclamada inició el **********, lo que quedó demostrado con la tarjeta de trabajo para puesto sindicalizado **********, de foja 105 de autos, por lo que el cómputo de la prescripción inició a partir del día siguiente de dicha ocupación, es decir, el ********** y el accionante tuvo hasta el ********** para ejercitar su acción, por lo que al haber presentado su demanda hasta el **********, la acción de preferencia de derechos que ejercitó, prescribió, al haber transcurrido en exceso los dos meses que establece el numeral en cita.—La suscrita considera que la determinación de la Junta es correcta, en virtud de que la acción de preferencia de derechos que en el caso se ejercitó, prescribió conforme al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, porque de acuerdo a la jurisprudencia transcrita, el término prescriptivo inició a partir del día siguiente al que se realizó la ocupación del puesto reclamado, esto es, a partir del día siguiente al en que ********** ocupó dicho puesto en forma definitiva, lo que ocurrió el **********, ya que ello se verifica con la documental consistente en la tarjeta de trabajo para puesto sindicalizado número **********, visible a foja 105 de autos, expedida por las demandadas y conlleva el hecho objetivo y jurídico de la ocupación del puesto por el trabajador citado, pues la documental en cita indica que en esa fecha fue contratado **********, constituyéndose en prueba fehaciente de la ocupación del puesto reclamado y demuestra que el quejoso tuvo conocimiento de la ocupación de la plaza; por tanto, en la especie, el cómputo del término prescriptivo inició el ********** y feneció el **********, por lo que si presentó su demanda el **********, transcurrió en exceso, encontrándose prescrita la acción conforme al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, fue correcta la determinación de la responsable, motivo por el cual estimo que es infundado el concepto de violación y debía negarse el amparo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en

esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PREFERENCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. A EFECTO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTORIO DE LA ACCIÓN, ES INSUFICIENTE ACREDITAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE QUIEN SE LE ASIGNÓ EL PUESTO DEMANDADO. El término prescriptorio de las acciones de preferencia de derechos contenidas en el artículo 157 de la Ley Federal del Trabajo, inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, es decir, desde que el trabajador conoce la postergación del derecho. En este sentido, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 103-108, Quinta Parte, página 113, de rubro: "PREFERENCIA, DERECHO DE. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA.", estableció diversos supuestos para determinar el momento en que el trabajador conoce o debe conocer, en forma objetiva, la violación de su derecho, siendo a partir: a) de que el patrón ponga en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse; b) del día siguiente al en que la agrupación sindical proponente dé publicidad adecuada y fehacientemente a la proposición o proposiciones que haga en favor de uno o varios obreros para ocupar una o varias vacantes; y, c) del día siguiente al en que se realiza la ocupación del puesto, en virtud de que este hecho tiene el carácter de público y notorio en el ámbito de la empresa o establecimiento. Luego, cuando no se cumplen los dos primeros supuestos, la ocupación de la plaza reclamada debe ser de tal manera pública y notoria que no exista duda de que el actor la conoció, lo que no se colma con la comprobación de la suscripción del contrato de trabajo de quien se le asignó el puesto demandado, pues esta prueba sólo constata la data en que se elaboró o firmó el documento, no que se haya ocupado.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.T.119 L (10a.)

Amparo directo 1137/2014. 15 de enero de 2015. Mayoría de votos. Disidente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Alethia Guerrero Silva.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRINCIPIO PRO PERSONA. ÚNICAMENTE ES APLICABLE PARA INTERPRETAR LA NORMA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y NO PARA INSTAURAR UN CRITERIO SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. El principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se pretenda establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Luego, dicho principio tiene dos variantes, la primera, como preferencia interpretativa, conforme a la cual ante dos o más interpretaciones de la norma válidas y razonables, el intérprete debe preferir la que más proteja al individuo u optimice un derecho fundamental y, la segunda, como preferencia normativa, conforme a la cual si pueden aplicarse dos o más normas a un determinado caso, el intérprete debe preferir la que más favorezca a la persona, independientemente de la jerarquía entre ellas. En consecuencia, este principio no se encuentra referido al alcance demostrativo de las pruebas, esto es, no opera para instaurar un criterio sobre su valoración –como podría hacerlo el diverso principio *in dubio pro reo*–, sino únicamente para la interpretación de normas con el objeto de establecer el contenido y alcance de los derechos humanos y, de este modo, otorgarles un sentido protector a favor de la persona humana.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.
(IV Región)2o.1 CS (10a.)

Amparo en revisión 30/2014 (cuaderno auxiliar 245/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Manuel Madrigal Álvarez y/o Raúl Figueroa Ochoa. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Castillo Garrido. Secretario: Gustavo Stivalet Sedas.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y SUBSECUENTE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL. EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), EN SU CARÁCTER DE LIQUIDADOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CARECE DE INTERÉS PARA IMPUGNAR LO DETERMINADO EN ÉL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/98, cuyo rubro dice: "BENE-

FICIARIOS EN MATERIA LABORAL, DECLARACIÓN DE. EL PATRÓN CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU RESOLUCIÓN.", sostuvo que el patrón carece de legitimación para reclamar la resolución recaída en el procedimiento de beneficiarios y dependencia económica porque la misma no genera un perjuicio o agravio personal o directo en la esfera jurídica de aquél, pues al existir una condena previa en su contra, independientemente de quién resulte beneficiario, éste deberá cumplirla. En tal tesitura, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de liquidador del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, cuyo objeto, conforme al decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y las bases para su proceso de desincorporación, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil nueve, son las de administración y dominio, con la facultad de suscribir u otorgar títulos de crédito, pudiendo intervenir para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, se subrogan al patrón en el cumplimiento de sus obligaciones. De ello se colige, que de igual forma carece de interés para impugnar lo determinado en el procedimiento especial y la subsecuente designación de beneficiarios.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.T.128 L (10a.)

Amparo directo 1406/2014. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). 25 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Raúl Santiago Loyola Ordóñez.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 22/98 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 92.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRÓRROGA DEL CONTRATO LABORAL. SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE MANERA SUBSIDIARIA A LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO.

AMPARO DIRECTO 1181/2014. 22 DE ENERO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: ALETHIA GUERRERO SILVA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Previo estudio de los conceptos de violación es pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes:

********** y ********** demandaron del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, la declaración jurisdiccional de que la relación que las unía con el organismo demandado era de trabajo, la reinstalación en su empleo, salarios caídos, y en el caso de que la parte demandada se excepcionara señalando que los contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado que la obligó a suscribir no eran más que contratos de trabajo, demandaron en forma cautelar la prórroga de la relación laboral, entre otras prestaciones de naturaleza laboral.

En los hechos de su demanda ********** y ********** refirieron que comenzaron a laborar para el demandado a partir del **********, en diferentes proyectos y departamentos de la institución, siendo el último el denominado **********, desempeñando a última fecha la categoría de "**********" o también conocido como **********.

En lo relativo al despido manifestaron que el **********, aproximadamente a las trece horas fueron llamadas por la trabajadora social **********, quien se desempeñaba como responsable del programa de "Discapacidad" y estando en presencia de compañeros de trabajo, padres de familia y público en general que atendía para la realización de los trámites correspondientes, les manifestó que por instrucciones de la directora general del DIF–Distrito Federal– Lic. ********** tenía órdenes de recortar personal, por lo que le solicitaron lo comunicara por escrito para conocer los motivos y las causas a lo que contestó que no era posible y que posteriormente les serían pagados los salarios correspondientes a agosto y les entregaría una carta de recomendación.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal manifestó que eran improcedentes las prestaciones respecto de que la relación que lo unía a las actoras era una relación de trabajo personal, subordinada y permanente, en virtud de que jamás había existido una relación laboral, toda vez que las actoras fueron contratadas bajo el régimen de honorarios, como se desprendía de los contratos de prestaciones de servicios bajo el régimen de honorarios que suscribieron las actoras con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, con fecha de vigencia del **********, así como los recibos de honorarios que las actoras expidieron a favor de la institución antes mencionada.

En los hechos de la demanda negaron la fecha de ingreso y sostuvieron que la vigencia del contrato de prestación de servicios bajo el régimen

de honorarios fue del ********** al **********, además, que en el citado contrato en su cláusula primera se estipuló: objeto del contrato. "El prestador" se obliga a la realización de las siguientes actividades: apoyo en la credencialización de niños de primaria y secundaria; apoyo en reparto de agua en las zonas de la ciudad que sufren escasez; apoyo en los recorridos de las zonas donde se encuentra mayor número de niños en situación de calle, así como realizar actividades administrativas para la atención de los programas sociales; que del citado contrato que firmaron las actoras se desprendía que las actividades para las cuales fueron contratadas, y que se mencionó en cada contrato, lo llevaban a cabo con libertad de criterio sin que se estableciera horario alguno, ni lugar en el que deberían de llevarlas a cabo; por lo que del contrato de referencia, se desprendía la falta de subordinación, esto es, la falta de dirección en el servicio prestado, por lo que resultaban improcedentes las acciones reclamadas por las actoras, dado que no existió relación laboral entre las partes; que en el contrato las actoras suscribieron con el demandado, y que se pactó como pago en su cláusula segunda el concepto de honorarios. Y también sostuvo que no existió el despido alegado en la fecha a que hizo referencia en su escrito de demanda, sino que, en todo caso, la separación de las actoras se debió a una terminación de contrato que expiró el **********.

La Junta dictó laudo condenatorio de la acción de reinstalación y sus accesorias al estimar que se acreditaba la existencia de una relación de trabajo con las actoras.

Inconforme con esa determinación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal y **********, promovieron juicios de amparo directo de los que conoció este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, bajo los DT. ********** y DT. **********, respectivamente; por ejecutorias pronunciadas el **********, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en ambos juicios; en el promovido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal para los efectos de que:

"a) La Junta deje insubsistente el laudo reclamado; b) Se pronuncie respecto a la temporalidad de la relación de trabajo de las actoras con el quejoso; c) Defina la fecha en que se rompió la relación de trabajo para resolver lo conducente a la acción de reinstalación por despido o en su caso la prórroga de la contratación; d) Respecto al reclamo de salarios devengados considere que es carga de las actoras demostrar que laboraron con posterioridad a la fecha en que el demandado refiere feneció la última contratación; e) Hecho lo anterior, emita el laudo que en derecho corresponda."

En el otorgado a ********** se concedió para el efecto de que:

"a) La Junta deje insubsistente el laudo reclamado; b) Se pronuncie respecto a la acción de prórroga ejercitada por las actoras en el inciso c) de su demanda; y, c) Hecho lo anterior, emita el laudo que en derecho corresponda."

En cumplimiento, la Junta dictó un segundo laudo de **********, absolutorio de la acción principal de reinstalación y sus accesorias.

Sentado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación, los que se analizarán de forma diversa a la planteada por cuestión de método.

En principio, las impetrantes afirman que, en cumplimiento a la vista que se les dio mediante acuerdo de **********, solicitaron se les tuviera manifestando su inconformidad con el contenido de las ejecutorias y el cumplimiento del laudo, por lo que deberá darse vista al Pleno de este tribunal para que resuelva lo que en derecho corresponda.

Son inoperantes sus manifestaciones, porque el presente juicio de amparo no es la vía para hacer sus alegaciones respecto al cumplimiento de las anteriores ejecutorias de amparo.

Por otro lado, las impetrantes aducen que fue indebido el planteamiento de la litis, pues la responsable determinó: "… si las actoras fueron despedidas injustificadamente de su trabajo y tienen derecho a la reinstalación en su empleo y al pago de las prestaciones reclamadas o si bien, como toralmente lo sustenta el organismo demandado DIF-DF, entre las partes jamás ha existido relación de trabajo", pues debió fijarse en el sentido de si existió relación de trabajo entre las partes o como lo refiere la demandada existió una relación diversa a la laboral.

Es inoperante el concepto de violación, toda vez que ese aspecto no fue impugnado en el amparo directo promovido por las quejosas contra un laudo primigenio, que correspondió al DT. **********, resuelto por este órgano colegiado en sesión de **********, toda vez que no expresaron concepto de violación en contra, por lo que se tiene por consentido y precluido su derecho a reclamarlo, ya que los motivos de inconformidad esgrimidos son cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional y quedaron firmes sin posibilidad de una impugnación posterior.

Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 57/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 196.

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE.—Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales."

En otro orden de ideas, señalan las impetrantes que en el hecho dos de la demanda se refirió que se demandaba la nulidad de cualquier documento que pudiere implicar renuncia de los derechos adquiridos de las actoras, por lo que si se trató de contrato de prestación de servicios profesionales, también se demandó su nulidad, ya que en realidad prestó un servicio personal, subordinado, mediante el pago de un salario, teniendo la obligación de acudir diariamente a la fuente de trabajo bajo un horario fijo, firmar los controles de asistencia, recibir las órdenes de trabajo y desempeñar el mismo, así como desempeñar las funciones y actividades que les fueron encomendadas, en términos de una relación de trabajo prevista en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, nulidad que afirma no fue analizada en los laudos.

Es igualmente inoperante el motivo de disenso, toda vez que ese aspecto no fue planteado en contra de un laudo primigenio, por lo que precluyó su derecho para plantear la inconformidad que aducen.

Por otra parte, las impetrantes sostienen que este Tribunal Colegiado de Circuito y la Junta responsable omitieron resolver la acción principal del juicio referida en el inciso A) del escrito inicial de demanda, relativo a que solicitaron la declaración jurisdiccional de que las actoras han venido prestando un servicio personal subordinado mediante el pago de un salario en forma permanente e ininterrumpida, en términos de los artículos 8, 10, 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, y el inciso F) relativo a la solicitud de la declaración jurisdiccional que tuvo que haber hecho la Junta en el sentido de que la prestación de servicios personales y subordinados ha sido de carácter permanente generando derechos de antigüedad a partir de la primera contratación, circunstancia que tampoco se observó.

Son infundados los conceptos de violación; lo anterior es así toda vez que la responsable en el laudo que se impugna en cuanto a las prestaciones señaladas refirió:

"… cabe destacar que en el presente sumario queda probado que el **********, el DIF-DF y cada una de las actoras celebraron un contrato denominado 'prestación de servicios bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios', que resultó de naturaleza laboral y que tuvo una temporalidad vigente del **********, por lo que al quedar acreditado que las actoras fueron contratadas por tiempo determinado, también queda demostrado que la terminación de la relación laboral fue con motivo que el citado **********, feneció la vigencia del respectivo contrato (data en que se rompió la relación de trabajo entre las partes), no así que las operarias hayan sido despedidas el ********** de ese año, máxime que del expediente en que se actúa no se advierte elemento de convicción del que pueda inferirse válidamente que con fecha posterior a la vigencia del correspondiente contrato hubiese subsistido la relación laboral."

Como se ve de la transcripción precedente, la Junta determinó la existencia de la relación de trabajo de las actoras con el organismo demandado, lo que es equivalente a la declaración de que han prestado un servicio personal subordinado mediante el pago de un salario. En cuanto a la temporalidad de la relación de trabajo, ha determinado que estuvo vigente del **********, lo que implícitamente lleva la declaración de que no ha sido en forma permanente e ininterrumpida, por lo que, contrario a lo expuesto por las recurrentes, la autoridad sí se ha pronunciado respecto a los reclamos que enuncian, de ahí lo infundado de los conceptos de violación.

Temporalidad de la contratación

Las impetrantes aducen que tanto este Tribunal Colegiado de Circuito, como la responsable no tomaron en cuenta que en el primer laudo se determinó que se acreditó plenamente la existencia de la relación de trabajo, por lo que al haber negado los hechos en su contestación a la demandada, la consecuencia era la aceptación de los mismos; pues al controvertir el hecho tres del escrito de demanda, los demandados se limitaron a referir que era falso, como en todos sus puntos de la contestación, ya que únicamente suscribieron un contrato bajo el régimen de honorarios por el periodo comprendido del **********, luego, si la demandada en su escrito de contestación negó la existencia de la relación de trabajo y adujo que las actoras fueron contratadas bajo el régimen de honorarios, no podía aducir que los contratos firmados por las actoras se equiparan a un contrato por tiempo determinado, en virtud de que para poder alegar un contrato de esa naturaleza tendrían que haberse acreditado las tres situaciones de excepción referidas en el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual no hizo.

Que independientemente de que las ejecutorias de los expedientes DT. ********** y DT. ********** determinaron a la responsable que estudiara la temporalidad de la relación de trabajo con libertad de jurisdicción, también debió analizar la consecuencia de haber quedado acreditada la existencia de la relación de trabajo, esto es, al haber quedado acreditado ese vínculo, también debían hacerse efectivas las presunciones legales derivadas del artículo 874, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que refieren que el silencio y las evasivas en la contestación a la demanda tendrían por admitidos los hechos sin permitir prueba en contrario.

También señalan que este Tribunal Colegiado de Circuito determinó que se analizara la temporalidad de la relación de trabajo de las actoras con el organismo demandado, mas no que la relación de trabajo se limitaba al último contrato de un mes, pues en autos quedó plenamente acreditado el periodo en que las actoras prestaron servicios continuos e ininterrumpidos por el periodo comprendido en la demanda, con los contratos exhibidos, recibos, gafetes, solicitudes de audiencia, mismos que no fueron objetados en cuanto a su autenticidad, así como el resultado de la prueba de inspección ofrecida por las quejosas, en que al no haber exhibido documento alguno, se tuvo por cierta la fecha de inicio de la relación, la fecha del despido o último día laborado.

Además, que la responsable sin argumentación jurídica concluyó que se equipara el contrato de naturaleza civil a un contrato de naturaleza laboral

temporal; sin analizar que no existe contrato individual de trabajo que acredite las tres causas de excepción del artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo para una contratación temporal, esto es, que fueron contratadas para sustituir a personal, que exista alguna causa temporal referida en la Ley Federal del Trabajo o porque hubiere existido una especial causa de contratación que justificara la temporalidad, por lo que al no existir causa generadora de contratación temporal, debía darse el principio general derivado de los artículos 17 y 35 de la Ley Federal del Trabajo.

Son infundados los conceptos de violación.

En los hechos de su demanda, las quejosas afirmaron que comenzaron a laborar para el organismo demandado a partir del ********** y se dijeron despedidas el **********, aproximadamente a las **********.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia afirmó que la contratación de las actoras fue por tiempo determinado y tiempo fijo, de conformidad con la vigencia del contrato que suscribieron con la institución del **********.

De lo anterior, la carga de la prueba para demostrar la temporalidad de la contratación referida era del patrón, lo que cumplió con los contratos de prestación de servicios exhibidos en juicio en que consta en la cláusula cuarta lo siguiente: (foja 70)

"Vigencia o plazo de ejecución. 'El prestador' se obliga a prestar sus servicios relativos a las actividades objeto de este contrato el **********, y a terminarlo a más tardar el ********** del mismo año; no obstante cualquiera de las partes podrá darlo por terminado anticipadamente durante su vigencia, dando aviso a la contraparte con una anticipación de 15 días naturales."

Contrato, cuyo valor es cosa juzgada, y con el cual se demuestra la temporalidad de la contratación motivo de la relación de trabajo.

Ahora bien, al ser demostrada la defensa del demandado relativa a la temporalidad de la contratación del **********, a las quejosas les correspondía demostrar que la relación laboral subsistió con posterioridad a la fecha de vencimiento del contrato, al haberse dicho despedidas el **********.

Ilustra lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 33/2013 (10a.), que puede ser consultada en la página 1188, Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que a la letra establece:

"CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL. CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DÍA EN QUE EL PATRÓN AFIRMA SE PRODUJO LA RENUNCIA Y EL POSTERIOR AL EN QUE AQUÉL DICE OCURRIÓ EL DESPIDO.—En el supuesto de que el despido se ubique en fecha posterior a la renuncia afirmada por el patrón, corresponde al trabajador acreditar la subsistencia de la relación de trabajo, y debe considerarse que el escrito relativo perfeccionado con motivo de las objeciones del suscriptor alcanza pleno valor probatorio, porque precisamente su efecto es demostrar que dicha relación llegó a su término, esto es, que le puso fin; por lo que el trabajador que aduzca haber seguido laborando debe demostrar fehacientemente ese hecho, y la presunción que resulta de la inspección no puede ser prueba contundente contra la renuncia sino, por el contrario, ésta es prueba fehaciente de que la relación de trabajo terminó en la fecha que el documento indica, porque jurídicamente una presunción no puede tener mayor alcance probatorio que una prueba fehaciente y, por tanto, no puede desvirtuar su valor probatorio. Inclusive, aun cuando se considerara que de la renuncia deriva la presunción de que el trabajador ya no se presentó a laborar porque ha dejado de prestar servicios para el patrón, y de la falta de presentación de documentos en la prueba de inspección, la presunción de que el trabajador continuó prestando servicios, existirían dos presunciones que, por ser contrarias, se excluirían entre sí, lo que corrobora el valor fehaciente del escrito de renuncia."

No obstante lo anterior, las actoras con las pruebas aportadas a juicio no probaron la existencia de la relación de trabajo con posterioridad al **********, pues las pruebas allegadas a juicio no son aptas para demostrarlo.

En principio, ambas actoras ofrecieron:

1. La confesional a cargo del organismo demandado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, no les beneficia en razón de que la absolvente por ésta contestó de manera negativa a las posiciones que le fueron formuladas (fojas 100 a 102).

2. La confesional para hechos propios a cargo de **********, desistió la parte actora (foja 114).

********** (en el escrito de pruebas se hizo mención a **********; sin embargo, de éste se advierte que son de la primera de las citadas), aportó a juicio como pruebas:

3. Las documentales consistentes en:

– Cuatro recibos de salarios del **********, mismos que no le benefician porque se trata de documentos unilaterales que no contienen la firma de algún representante de la demandada, y no comprenden el periodo posterior a la fecha del vencimiento del contrato.

– El gafete o credencial número **********, expedida por el demandado por conducto de **********, objetada en cuanto autenticidad de contenido y firma (foja 79), no se encuentra agregado en los autos del juicio de origen; sin embargo, en audiencia de ********** (foja 125) consta que la actora desistió de la ratificación de esa documental, por lo que, con independencia de su contenido, ésta carecería de valor probatorio por no haber sido perfeccionada.

– Solicitud de audiencias de **********, es una copia fotostática escrita a mano y no comprende el periodo posterior al vencimiento del contrato.

4. La testimonial a cargo de **********, la actora se comprometió a presentar a sus testigos al ofrecer la prueba, sin que lo haya realizado, por lo que el día de la audiencia se declaró la deserción de los testigos (foja 104 vuelta), toda vez que se le hizo efectivo el apercibimiento hecho al admitir la prueba con fundamento en los artículos 780 y 815, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; lo que se estima correcto, pues si la actora se comprometió a presentarlos debió realizarlo, o bien, manifestar imposibilidad para ello, sin que esto haya acontecido.

5. La inspección en el lugar donde prestó sus servicios la actora correspondiente al **********, que se ofreció en los siguientes términos: (foja 56).

"V. La de inspección, que se practique en el domicilio del organismo demandado, es decir, el lugar donde prestó servicios la actora, correspondiente al programa de atención a personas con discapacidad, con domicilio en **********, por conducto del actuario adscrito a esta Junta, quien deberá requerir se le ponga a la vista las nóminas, recibos de salario, contratos individuales de trabajo, tarjetas o controles de asistencia y demás documentos

administrativos laborales correspondientes al renglón de la actora **********, por un periodo comprendido del ********** o, en su defecto, por el último año efectivamente laborado, es decir, del **********, a quien se le deberán exhibir los contratos de trabajo, listas de asistencia, recibos de salarios, recibos de aguinaldo y demás documentos administrativos laborales, a fin de acreditar los siguientes extremos:

"1. Que la actora comenzó a laborar a partir del **********.

"2. Que la actora desempeñó la categoría de ********** o ********** en el área de discapacidad.

"3. Que la actora desempeñó su trabajo personal y subordinado con un horario comprendido de las ********** a ********** horas de lunes a sábado.

"4. Que la actora devengaba un salario diario de **********.

"5. Que la actora devengaba un aguinaldo anual de ********** días.

"6. Que la actora devengaba una prima vacacional del ********** %.

"7. Que a la actora se le adeudaban las vacaciones correspondientes a todo el tiempo de duración del trabajo.

"8. Que a la actora se le adeuda el aguinaldo por todo el tiempo de duración de la relación de trabajo.

"9. Que la actora laboró treinta y seis horas extras semanarias durante todo el tiempo que duró la relación laboral.

"10. Que los demandados se abstuvieron de pagar al actor el importe correspondiente a las horas extras que laboraba diariamente.

"Esta prueba se ofrece y se relaciona con todos y cada uno de los hechos controvertidos en el presente juicio y deberá admitirse en sus términos por tener relación con los hechos controvertidos del presente juicio, así como por estar ofrecida en términos de lo dispuesto por los artículos 827 al 829 de la Ley Federal del Trabajo."

Prueba que fue admitida por un año anterior a la fecha de la demanda (foja 87), siendo desechados los extremos 1, 7, 8, 9 y 10, respecto de la cual se

exhibieron los contratos de servicios profesionales de la actora del ********** y recibo de honorarios de ********** (foja 109); luego, ante la falta de exhibición de las documentales solicitadas, se tuvo por cierto: "2. Que la actora desempeñó la categoría de ********** o ********** en el área de discapacidad.", "3. Que la actora desempeñó su trabajo personal y subordinado con un horario comprendido de las ********** a ********** horas de lunes a sábado.", "4. Que la actora devengaba un salario diario de **********", "5. Que la actora devengaba un aguinaldo anual de ********** días." y "6. Que la actora devengaba una prima vacacional del ********** %.", por el periodo señalado.

Empero, la presunción que resulta de la inspección no prueba contra el contrato sino, por el contrario, éste es prueba fehaciente de que la relación de trabajo terminó en la fecha que el documento indica, además de que no existe indicio de que la relación continuó con posterioridad al vencimiento del contrato, porque no existe inciso relativo a la subsistencia de la relación de trabajo al **********; y, por tanto, la inspección no desvirtúa su valor probatorio.

En cuanto a **********, ésta aportó como pruebas:

3. Las documentales consistentes en:

– Las copias simples de dos recibos de salario de **********, las que no benefician a su oferente porque se trata de documentos unilaterales y no comprenden el periodo posterior a la fecha del vencimiento del contrato.

– El block de recibos de honorarios del ********** al ********** expedido por la actora a favor del organismo demandado, también es ineficaz al no comprender el periodo posterior al vencimiento del contrato.

– Los cuatro recibos de honorarios del **********, tampoco abarcan el periodo posterior al vencimiento del contrato.

4. La testimonial a cargo de **********, se desahogó al tenor del siguiente interrogatorio (fojas 105 a 108).

********** contestó como sigue:

"A preguntas que le formula esta Junta el testigo respondió: 1. Edad: R. ********** años. 2. Estado civil: R. **********. 3. Domicilio: R. **********.

4. Ocupación: R. **********. 5. Lugar en que trabaja: R. Trabajo en **********. 6. Si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes: R. No. 7. Si es pariente o empleado de la parte que pide su testimonio: R. Sí, soy familiar. 8. Si tiene con la parte que pide su testimonio o con la contraria algún tipo de sociedad u otra relación de intereses: R. No. 9. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito: R. No. 10. Si es amigo o enemigo de alguna de las partes o los litigantes: R. No. 11. Si conoce cuál es el motivo de su presencia en la diligencia en la que va a intervenir: R. Sí, atestiguar. A preguntas formuladas por la parte actora dirá dicha testigo si sabe y le consta.—1P. Que diga la testigo si conoce a **********, actora en este juicio. R. Sí, si la conozco. 2P. Que diga la testigo dónde conoció a la actora del presente juicio. R. En el DIF. 3P. Que diga desde cuándo conoce a la actora del presente juicio. R. Desde el dos mil siete. 4P. Que diga la testigo por qué motivo conoció a la actora del presente juicio. R. Porque trabajamos juntas. 5P. Que diga la testigo dónde trabajaban juntas la testigo y la actora en el presente juicio. R. En el DIF. 6P. Que diga la testigo si sabe si actualmente ********** sigue trabajando para el DIF. R. No ya no trabaja. 7P. Que diga la testigo por qué sabe que ya no trabaja para el DIF. R. Porque a ambas nos corrieron. 8P. Que diga la testigo por qué sabe y le consta lo que ha declarado, es decir, la razón de su dicho. R. Porque el día que la despidieron yo había ido haber (sic) si me iban a reubicar en mi puesto y escuché cuando les dijeron que ya no iban a trabajar ahí concretamente la señora ********** que era la responsable del programa de discapacidad."

********** señaló que:

"A preguntas que le formula esta Junta el testigo respondió: 1. Edad: R.********** años. 2. Estado civil: R. **********. 3. Domicilio: R. **********. 4. Ocupación: R. **********. 5. Lugar en que trabaja; 6. Si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes: R. No, ninguno. 7. Si es pariente o empleado de la parte que pide su testimonio: R. No o (sic) soy pariente. 8. Si tiene con la parte que pide su testimonio o con la contraria algún tipo de sociedad u otra relación de intereses: R. No. 9. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito: R. No. 10. Si es amigo o enemigo de alguna de las partes o los litigantes: R. No, nada más vengo a decir lo que yo vi. 11. Si conoce cuál es el motivo de su presencia en la diligencia en la que va a intervenir: R. Bueno yo sé el problema porque las personas iban a mi cosa (sic) porque yo soy beneficiaria. Atestiguar.—Preguntas formuladas por la parte actora dirá dicha testigo si sabe y le consta.—1P. Que diga la testigo si conoce a la actora en el presente juicio **********. R. Sí, si la conozco. 2P. Que

diga la testigo dónde conoció a la actora **********. R. Ahí en su pobre caso (sic) la conocí pasó a visitarnos para explicarnos el programa de la discapacidad. 3P. Que diga la testigo si sabe dónde prestaba sus servicios la actora en el presente juicio **********. R. Por el programa de discapacidad del desarrollo del DIF. 4P. Que diga la testigo si sabe si actualmente continúa laborando la actora en este juicio ********** para el DIF. R. Cuando yo la conocí que fue me parece que en ********** tuve roce yo con ella y después cuando yo me entero que ya no me fueron a visitar yo fui al programa haya (sic) a las oficinas y ahí me las encontré y me dijo por qué no me visitaban y me dijo que ya no ibas (sic) a visitar porque ya las habían despedido eran dos compañeras que me fueron y yo fui entre ********** fue la última vez que yo la vi. 5P. Que diga la testigo por qué sabe y le consta lo que ha declarado con anterioridad, es decir que diga la razón de su dicho. R. Que fueron injustos nada más porque eras (sic) unas personas que andan ya muy tarde a visitar a la gente, me iban a visitar los sábados y domingos, sí se me hace muy injusto. No se formulan más posiciones y ratifica lo expuesto previa lectura y firma al margen para constancia."

********** manifestó:

"A preguntas que le formulan esta Junta el testigo respondió: 1. Edad: R. **********. 2. Estado civil: R. **********. 3. Domicilio: R. **********. 4. Ocupación: R. **********. 5. Lugar en que trabaja: R. (sic). 6. Si es pariente por consanguinidad o afinidad y en qué grado de alguno de los litigantes: R. No. 7. Si es pariente o empleado de la parte que pide su testimonio: R. No. 8. Si tiene con la parte que pide su testimonio o con la contraria algún tipo de sociedad u otra relación de intereses: R. No, solamente atestiguar. 9. Si tiene interés directo o indirecto en el pleito: R. Estoy neutro. 10. Si es amigo o enemigo de alguna de las partes o los litigantes: R. Neutro. 11. Si conoce cuál es el motivo de su presencia en la diligencia en la que va a intervenir: R. Atestiguar. A preguntas formuladas por la parte actora dirá dicha testigo si sabe y le consta. 1P. Que diga la testigo si conoce a la actora en este juicio **********. R. Sí la conozco. 2P. Que diga dónde conoció a **********. R. En el DIF. 3P. Que diga la testigo por qué motivo conoció a la actora en el presente juicio. R. Yo iba ahí a buscar una ayuda de discapacidad ahí con ella por eso la conocí. 4P. Que diga la testigo si sabe dónde trabajaba **********. R. Sí en el DIF. 5P. Que diga la testigo si sabe si actualmente ********** sigue trabajando para el DIF. R. Ya no. 6P. Que diga la testigo por qué sabe que ya no labora para el DIF. R. Ella me comentó que ya no trabaja para el DIF. 7P. Que diga la testigo la razón de su dicho es decir por qué sabe y le consta lo que ha

declarado. R. Porque yo he ido al DIF a buscar mi ayuda (sic) y ya no la encontré a ella ya de ahí ella después me comentó que ya no labora ahí. No se formulan más posiciones y ratifica lo expuesto previa lectura y firma al margen para constancia."

Como se ve, esa probanza no es apta para probar la existencia de la relación de trabajo posterior al vencimiento del contrato, pues ********** a la respuesta a la pregunta ocho, sólo afirmó que estuvo presente en el hecho del despido sin especificar el día en que ocurrió, y no declaró respecto de la existencia de la relación de trabajo posterior a la fecha del multicitado contrato, por lo que su testimonio no es apto para probar los hechos alegados.

En lo referente a **********, ésta refirió en la respuesta a la pregunta cinco que la actora le dijo que ya no la iban (sic) a visitar porque la había, despedido, y que fue en septiembre de dos mil nueve entre el ********** la última vez que la vio; manifestaciones con las que se demuestra que no le consta el hecho del despido, ya que sólo sabe lo que le dijo la actora; incluso incurre en contradicción, al señalar que la vio el ********** en que le manifestó que ya no la iba a ver porque la despidieron, siendo que si la actora se dijo despedida el **********, no pudo dejarla de ir a ver con motivo del despido, porque ese supuesto hecho aconteció hasta la data en que afirma la vio.

Por último, ********** en la respuesta a la pregunta seis manifestó que la actora le comentó que ya no trabajaba para el DIF, de lo que no le constan los hechos del despido y, además, tampoco declaró respecto del mismo, ni en lo relativo a si la actora trabajó del **********.

Razones por las que se considera que la testimonial ofrecida por ********** no es apta para probar la subsistencia de la relación de trabajo con posterioridad al **********.

5. La inspección en el domicilio de **********, al haberse desahogado de manera conjunta con la inspección ofrecida por **********, valorada en líneas precedentes, se tiene por reproducido su valor con el fin de evitar repeticiones innecesarias.

Empero, la presunción que resulta de la inspección no prueba contra el contrato sino, por el contrario, éste es prueba fehaciente de que la relación de trabajo terminó en la fecha que el documento indica, además de que no existe indicio de que la relación continuó con posterioridad al vencimiento

del contrato, porque no existe inciso relativo a la subsistencia de la relación de trabajo al **********; y, por tanto, la inspección no desvirtúa su valor probatorio.

De lo expuesto, se ve que las actoras no allegaron al juicio las pruebas que demostraran la subsistencia de la relación de trabajo con posterioridad al vencimiento del contrato celebrado con la demandada, cuya vigencia abarcó del **********, por tanto, se desvirtúa el hecho del despido que dijeron se suscitó el ********** a las ********** horas y en ese sentido es correcta la determinación de la responsable al absolver de la reinstalación en los puestos de trabajo.

Ahora bien, respecto a la temporalidad de la contratación es pertinente señalar que si bien las actoras demandaron en el hecho dos de la demanda lo siguiente:

"2. El organismo demandado en forma mensual nos hacía firmar contrato y hojas en blanco, de los cuales no se nos proporcionó una copia, por lo que desconocemos su contenido, por lo que se reclama la nulidad de cualquier contrato o documento que contenga renuncia de los derechos del trabajador, ya que la prestación del servicio laboral fue continuo y permanente desde la fecha de contratación hasta la fecha del despido, además de hacer ese trabajo una necesidad permanente para la demandada.—En consecuencia, demando la nulidad de cualquier tipo de documento que pudiere ser usado en mi contra y que se hubiere expedido en contra de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Si se trata de contrato de prestación de servicios profesionales, también se demanda su nulidad, ya que en realidad presté un servicio personal, subordinado, mediante el pago de un salario, en términos de una relación de trabajo prevista en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la prestación de un servicio personal, subordinado, mediante el pago de un salario, teniendo la obligación de acudir diariamente a nuestra fuente de trabajo bajo un horario fijo, firmar los controles de asistencia, recibir las órdenes de trabajo y desempeñar el mismo, así como desempeñar las funciones y actividades que nos fueran encomendadas.—No realicé actividad que requiriere título o cédula profesional que pudiere ser considerado como requisito indispensable para la realización de alguna actividad que pudiere corresponder a un contrato de prestación de servicios profesionales, por lo que cualquier documento que con engaños me hizo firmar el organismo demandado debe ser considerado como relación de trabajo.—Como se desprende de las jurisprudencias y criterios que a continuación reproducimos, no existe motivo o justificación legal alguna, para hacer valer una contratación temporal o profesional respecto de una actividad permanente del

organismo demandado como es la verificación de datos y acopio de documentos de personas discapacitadas que forman parte de un programa permanente del propio sistema.—La circunstancia de haberme obligado a firmar mensual o periódicamente contratos temporales o mal llamados profesionales, daría motivo a que dichos contratos estén afectados de nulidad absoluta, en base a la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos por los trabajadores. 'CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. EFECTOS DE LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE SU CAUSA MOTIVADORA.' (se transcribe texto, cita datos de localización y precedentes).—De acuerdo con la anterior tesis, en aquellos casos en que no se señala la causa motivadora de la temporalidad de la relación laboral, ésta debe de entenderse por tiempo indefinido, no obstante que se establezca un término de vigencia. En el caso que nos ocupa es plenamente aplicable este criterio, ya que si bien es cierto que se fijó un periodo de vigencia, éste en forma alguna se justificó, lo que trae como consecuencia que la relación se entienda por tiempo indefinido. 'CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, DEBE ESTABLECERSE CON PRECISIÓN SU CAUSA MOTIVADORA.' (se transcribe texto, cita datos de localización y precedentes). 'CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. CASO EN QUE SE CONSIDERA COMO CONTRATACIÓN POR TIEMPO INDEFINIDO.' (se transcribe texto, cita datos de localización y precedentes).—En mi caso, es completamente aplicable el anterior criterio jurisprudencial, ya que estuve prestando mis servicios a través de contratos temporales por un periodo considerable, sin que en ninguno de ellos se especificara el motivo o causa de su limitación, desde luego en términos legales, ya que lo especificado, únicamente constituye una simulación de actos inexistentes. 'CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. NULIDAD DE, DADA SU INCOMPROBACIÓN.' (se transcribe texto, cita datos de localización y precedentes).—De la anterior tesis se desprende que deberán dejarse sin efectos los contratos de prestación de servicios profesionales que me obligaron a suscribir, al no existir ninguna justificación para su limitación, lo que conlleva a que deban ser reinstalados y se les paguen los salarios que se generen durante la tramitación del presente juicio. 'CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, CARACTERÍSTICAS Y PRÓRROGA DEL.' (se transcribe texto, cita datos de localización y precedentes)."

Como se ve, no precisaron cuál era el contrato que aducían debía ser por tiempo indeterminado, y las razones por las cuales no le asistía el carácter de temporal a esa contratación, pues se limitaron a reclamar la nulidad de cualquier contrato o documento que contuviera renuncia de los derechos del trabajador, ya que la prestación del servicio laboral fue continuo y permanente desde la fecha de contratación hasta la fecha del despido.

Sin que obste a lo anterior, que manifestaron que el organismo demandado en forma mensual las hacía firmar un contrato y hojas en blanco, de los cuales no se les proporcionó una copia, por lo que desconocían su contenido, ya que esa manifestación se encuentra desvirtuada con su propio dicho vertido en la propia demanda, relativo a que: "La circunstancia de haberme obligado a firmar mensual o periódicamente contratos temporales o mal llamados profesionales, daría motivo a que dichos contratos estén afectados de nulidad absoluta, en base a la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos por los trabajadores … En el caso que nos ocupa es plenamente aplicable este criterio, ya que si bien es cierto que se fijó un periodo de vigencia, éste en forma alguna se justificó, lo que trae como consecuencia que la relación se entienda por tiempo indefinido." Luego, las impetrantes estuvieron en aptitud de demandar la nulidad del contrato exhibido por la demandada vigente del ********** al ********** con el que quedó demostrada la temporalidad de la contratación y, de no hacerlo así, no puede ser declarada la nulidad del mismo.

Prórroga de la relación de trabajo

Las impetrantes refieren que respecto a la acción de prórroga, la responsable dejó de analizar las funciones y actividades que desempeñaron, si existió o no la materia de trabajo que dio origen al contrato, los supuestos en que procedía y a quién le correspondía la carga de la prueba. Invocan en apoyo a lo anterior el criterio de rubro: "ACCIÓN DE PRÓRROGA DE CONTRATO POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA DE LA INSUBSISTENCIA DE LA MATERIA DE TRABAJO QUE ORIGINÓ LA CONTRATACIÓN RELATIVA."

Asimismo, señalan que los demandados no acreditaron si existía o no la materia del trabajo, pues la carga de la prueba de la subsistencia de las causas de la contratación temporal de las actoras le correspondía a éstos en términos de los artículos 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, a lo cual refieren que no ofrecieron prueba que acreditara la subsistencia o conclusión de las causas generadoras de la contratación, por lo que debió declararse procedente esa acción; además de que la responsable confundió la prórroga con la temporalidad de la materia del trabajo.

Es infundado el concepto de violación.

En su demanda laboral, las actoras reclamaron como acción el cumplimiento del contrato de trabajo y la inmediata reinstalación en el empleo, en los términos y condiciones en que venían laborando; y señalaron que en el

indebido caso de que la parte demandada se excepcionara afirmando que los contratos de prestación de servicios profesionales eran por tiempo determinado, demandaron igualmente, en forma cautelar, la prórroga de la relación laboral, haciendo mención de que las limitaciones de sus contrataciones no tenían fundamento legal y también refirieron que no se estableció ningún supuesto del artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo, o algún otro que justificara su duración.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia afirmó que la contratación de las actoras fue por tiempo determinado, de conformidad con la vigencia del contrato que suscribieron con la institución del ********** al **********.

Como quedó definido, la demandada justificó la defensa relativa a la temporalidad de la contratación y, en ese sentido, se estimó improcedente la acción de reinstalación por haber fenecido la temporalidad establecida en el contrato de prestación de servicios.

En cuanto a la acción de prórroga, con independencia de las razones que vertió la responsable para absolver de esa acción, el fallo es correcto.

El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo establece:

"Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario.—Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo."

Por su lado, el artículo 39 de la misma ley dispone:

"Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia."

Como se ve, ambos preceptos establecen dos circunstancias disímiles, por un lado, la acción de reinstalación estatuye el cumplimiento del contrato de trabajo y por el otro, la prórroga establece que si vencido el contrato subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por el tiempo que perdure esa circunstancia.

Luego, cuando en un juicio laboral se intenta la acción de prórroga para el caso de que no proceda la de reinstalación por despido injustificado, sosteniendo que a la fecha en que aconteció el evento se mantenía viva la relación, es improcedente su reclamo pues ambos hechos no pueden coexistir, ya que si la reinstalación tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que el patrón que despida injustamente a un trabajador está obligado a cumplir con el contrato de trabajo, lo que presupone que cuando se afirme haber sido objeto de un despido la relación se encuentra vigente; la acción de prórroga encuentra sustento en el artículo 39 de la ley laboral, en cuanto a que si vencido el término del contrato, subsisten las causas que le dieron origen, deberá continuar por todo el tiempo que perduren. Por tanto, estas acciones dependen de la fecha en que se registra la ruptura de la relación laboral, la primera del día del despido y la segunda del día siguiente al del vencimiento del contrato; de ahí que si ambas acciones no pueden ser coincidentes en la causa, ni en el día de rompimiento del nexo, no pueden demandarse de manera subsidiaria.

Por tanto, si como en el caso las actoras demandaron la reinstalación con motivo del despido injustificado que dijeron se suscitó el **********, no podían demandar la prórroga del contrato que había vencido el **********, porque éste no puede estar vigente y a la vez no, además, si estaba vigente no existía necesidad de prorrogarlo, pues aún no había vencido; luego, al haber sustentado las impetrantes la demanda en hechos que se contraponen entre sí, lo procedente era absolver de la prórroga demandada.

A mayor abundamiento, se aprecia que la acción de prórroga era improcedente por carecer de elementos de la acción.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1, sostenida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Informe 1982, Parte II, página 5, que establece:

"ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA.—Si las excepciones opuestas por la parte demandada no prosperan, no por esa sola circunstancia ha de estimarse procedente la acción intentada, sino que en el estudio del negocio deben considerarse también, y principalmente, los presupuestos de aquélla, los cuales deben ser satisfechos, so pena de que su ejercicio se considere ineficaz."

Así como la diversa tesis de jurisprudencia sostenida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, página 86, que dice:

"ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.—Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación, conforme a la ley, de examinar la acción deducida y las excepciones opuestas, y si encuentran que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones opuestas."

Como se vio, el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo otorga el derecho para que el contrato sea prorrogado por todo el tiempo en que subsista la materia de trabajo, por lo que en ese sentido las cláusulas que establezcan un término de vigencia al contrato de trabajo son válidas y operan en sus términos, ya que la protección al trabajador para continuar prestando sus servicios que se da en el citado artículo 39, sólo requiere el ejercicio de la acción correspondiente.

Lo anterior significa que el contrato individual de trabajo por tiempo determinado sólo puede concluir al vencimiento del término pactado, cuando se ha agotado la causa que dio origen a la contratación, que debe ser señalada expresamente, a fin de que se justifique la terminación de dicho contrato al llegar la fecha en él señalada y, en su caso, al prevalecer las causas que le dieron origen, el contrato debe ser prorrogado por subsistir la materia del trabajo por todo el tiempo en que perdure dicha circunstancia, según lo dispone el artículo 39 de la ley de la materia.

En ese sentido, era menester que fuera precisado el contrato del que se demandó la prórroga, pues a partir del vencimiento de éste sería cuando se ordenara la continuación de la relación de trabajo por subsistir la materia del mismo; de ahí que si no se conoce qué contrato es el que debe prorrogarse, no puede condenarse a su prórroga pues no se sabría cuándo feneció, y qué actualizó la condición para la procedencia de la acción de prórroga; por tanto, si bien las impetrantes demandaron esa acción, en caso de que el demandado se excepcionara manifestando que celebró contratos por tiempo determinado con las actoras, no especificaron cuál era el contrato del que demandaron su continuidad y, por ello, existe otro motivo para estimar que la acción entablada era improcedente.

En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 76, 170, 184 y 188 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra el acto de la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, consistente en el laudo pronunciado el **********, en el juicio laboral **********, seguido por las quejosas contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, en sesión pública, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña y Héctor Landa Razo, en contra de la Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos, quien emitió voto particular. Fue ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular de la Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos: Respetuosa del criterio de la mayoría estimo que en el presente asunto debió declararse fundado el concepto de violación en el que se aduce que, respecto a la acción de prórroga, la responsable dejó de analizar las funciones y actividades que desempeñaron las actoras, así como si existió o no la materia de trabajo que dio origen al contrato, los supuestos en que procedía esa acción y a quién le correspondía la carga de la prueba.—Lo anterior es así porque del escrito de demanda se advierte que lo demandó en forma subsidiaria y, en ese tópico, la misma podía prosperar si su reclamo se hizo oportunamente, es decir, dentro del plazo legalmente establecido para ello.—Del mismo modo se estima que la autoridad debió analizar si se actualizaba o no el derecho de prórroga, aun cuando se hubiera demandado la reinstalación, en razón de que la acción de reinstalación conlleva al estudio del cumplimiento del contrato, mientras que la pretensión del actor al demandar subsidiariamente la prórroga, ha de resolverse sobre la subsistencia de la materia del trabajo.—De ahí que, aun cuando la naturaleza de las acciones de que se trata son distintas, la demanda de una no impide el estudio de la otra. Sirve de apoyo, por identidad jurídica sustancial, la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volumen 59, Quinta Parte, página 30, que dice: "PRÓRROGA DEL CONTRATO, ACCIÓN DE, Y SUBSIDIARIAMENTE

DE REINSTALACIÓN. EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE AMBAS ACCIONES NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL DEL DESPIDO.—Cuando se demanda la prórroga del contrato y como consecuencia la reinstalación, no deben confundirse estas acciones con la de despido, sólo por el hecho de que se hubiera reclamado subsidiariamente la reinstalación, pues en aquel caso no se tiene que resolver sobre el cumplimiento del contrato de trabajo a que alude la fracción XXII del artículo 123 de la Constitución Federal y el 48 de la Ley Federal del Trabajo, sino si existe la materia del trabajo y si otra persona ocupa el puesto que se reclama, por lo que en estos casos debe estarse a lo establecido en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que señala como regla general el término de un año para la prescripción de las acciones, y no a lo establecido en el artículo 518 del propio ordenamiento, que establece dos meses para la prescripción de las acciones derivadas de la separación del trabajador.

Este voto se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

PRÓRROGA DEL CONTRATO LABORAL. SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE MANERA SUBSIDIARIA A LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO. Cuando en un juicio laboral se promueve la acción de prórroga del contrato de trabajo para el caso de que no proceda la de reinstalación por despido injustificado, sosteniendo que a la fecha en que aconteció el evento se mantenía viva la relación laboral, su reclamo es improcedente, pues ambos hechos no pueden coexistir, ya que si la reinstalación tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, del que se colige que el patrón que despida injustamente a un trabajador está obligado a cumplir con el contrato de trabajo, lo que presupone que cuando se afirma haber sido objeto de un despido la relación se encuentra vigente; la acción de prórroga encuentra sustento en el artículo 39 de la citada ley, en cuanto a que si vencido el término del contrato, subsisten las causas que le dieron origen, deberá continuar por todo el tiempo que perduren. Por tanto, dichas acciones dependen de la fecha en que se registra la ruptura de la relación laboral, la primera del día del despido; y, la segunda, del día siguiente al del vencimiento del contrato; de ahí que si ambas no pueden ser coincidentes en la causa, ni en el día de rompimiento del nexo, no pueden demandarse de manera subsidiaria.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.T.118 L (10a.)

Amparo directo 1181/2014. 22 de enero de 2015. Mayoría de votos. Disidente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Alethia Guerrero Silva.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES ÚTIL PARA INTERPRETARLAS CUANDO ÉSTAS REGULAN FENÓMENOS COMPLEJOS Y TIENEN EFECTOS ECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS, ENTENDER ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SU EMISIÓN O COMPRENDER SU ALCANCE O LA AFECTACIÓN QUE PROVOCAN. En el juicio de amparo contra normas generales, la litis constitucional consiste en discernir su conformidad con la Constitución, a la luz de los conceptos de violación; sin embargo, cuando aquéllas regulan fenómenos complejos y tienen efectos económicos y tecnológicos, la prueba pericial puede resultar de utilidad, en cuanto aporte elementos para interpretarlas, entender aspectos técnicos relacionados con su emisión o comprender su alcance o la afectación que provocan en la esfera jurídica de las personas a quienes van dirigidas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.26 K (10a.)

Queja 107/2014. SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ANALIZAR ASPECTOS TÉCNICOS, SOLICITADA POR LOS PERITOS PARA ELABORAR SU DICTAMEN. Cuando para elaborar el dictamen correspondiente a una prueba pericial admitida en el juicio de amparo indirecto, el perito solicita al Juez de Distrito que requiera a la autoridad responsable la información necesaria para analizar aspectos técnicos, con la finalidad de decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, debe proveer favorablemente, en la inteligencia de que si la información es de naturaleza reservada o confidencial, como pueden ser los secretos industriales o comerciales, la autoridad debe generar una versión pública en términos del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que permita el desahogo de la prueba pericial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.27 K (10a.)

Queja 111/2014. Operadora Unefón, S.A. de C.V. 22 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBA PERICIAL. LA VISTA QUE DEBE DARSE A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN Y FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ESTÁ IMPLÍCITA CON LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL ENJUICIADO Y AL CORRÉRSELE TRASLADO AL DEMANDADO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA, RESPECTIVAMENTE. La prueba pericial en el procedimiento judicial de ejecución de garantía otorgada mediante prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía no se rige por las reglas generales sobre la prueba, en particular por los artículos 1198 y 1203 del Código de Comercio; sino por los diversos 1254, 1414 Bis 12, 1414 Bis 13, 1414 Bis 14 y 1414 Bis 15 del mismo código, de los que se obtiene que cuando las partes deseen ofrecer la prueba pericial deberán hacerlo en los escritos de demanda o contestación, en los que proporcionarán el nombre y apellidos del perito, relacionarla con los hechos que se pretenden demostrar y exhibir copia del cuestionario al tenor del cual deberá desahogarse. En tanto que, en el auto que tenga por contestada o no la demanda, el Juez debe resolver si la admite o no. En ese orden de ideas, es evidente que la vista que debe darse a la contraparte del oferente, respecto de la pertinencia de la prueba pericial y, en su caso, para que nombre perito de su parte o amplíe los puntos y cuestiones conforme a los cuales habrá de desahogarse, se encuentra implícita en el hecho de correrle traslado al demandado para que conteste la demanda instaurada en su contra; ello es así, debido a que, en ese tipo de procedimiento, no existe un periodo de ofrecimiento de pruebas, ya que al recibir la contestación, el Juez debe pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas; mientras que la vista que debe darse al actor con éstas, es al momento en que se le da con las excepciones opuestas por el enjuiciado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.3o.C.154 C (10a.)

Amparo en revisión 301/2013. Metrofinanciera, S.A. Promotora de Inversión de C.V., S.F. de O.M., entidad no regulada y otro. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Adolfo Almazán Lara.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE COMPROMETA A PRESENTARLOS. Los medios probatorios tienen una importancia esencial dado que su función es formar el convencimiento del juzgador sobre la verdad de los hechos litigiosos, los cuales se rigen de acuerdo con los principios de pertinencia y de utilidad. Ahora bien, del artículo 1401 del Código de Comercio, se advierte lo siguiente: 1. En los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta, las partes ofrecerán sus pruebas relacionándolas con los puntos controvertidos: Deben proporcionar el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado; asimismo, deben señalar todos los datos respecto de sus peritos y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario que deban resolver. 2. Si los testigos no se hubieren mencionado con sus nombres y apellidos en los escritos que fijan la litis, el Juez no podrá admitirlas aunque se ofrezcan posteriormente, salvo que importen una excepción superveniente. 3. Desahogada la vista o transcurrido el plazo, el Juez admitirá y mandará a preparar las pruebas que procedan, abriendo el juicio a desahogo de éstas por un término de quince días. 4. Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el Juez, serán bajo la responsabilidad de éste quien, sin embargo, podrá mandarlas concluir en una sola audiencia, dentro de los diez días siguientes. En este sentido, se prevé que en el primer párrafo del citado artículo, el legislador estableció de manera enunciativa los requisitos que deben contener las pruebas (específicamente la testimonial y la pericial), que ofrezcan en los escritos correspondientes; sin embargo, en su segundo párrafo, el legislador de manera imperativa, obligó al juzgador a no admitir la prueba testimonial cuando las partes no hayan proporcionado en los escritos relativos los nombres y apellidos de los testigos. Por tanto, la omisión de las partes de señalar el domicilio de los testigos, no da lugar al desechamiento de dicha prueba, siempre que en el libelo correspondiente se señalen los nombres y apellidos de los atestes, y el oferente se comprometa a presentarlos; interpretación que es acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la interpretación pro persona que impone a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a aplicar las normas de modo tal que se maximice la protección de los derechos humanos

previstos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales en la materia, en los que México es parte. De este modo, es incuestionable que el derecho humano al debido proceso contenido en el artículo 16 del Documento Fundamental, concretamente en el punto concerniente al derecho de ofrecer pruebas en juicio, se ve favorecido por una postura razonable que, sin detrimento del derecho del adversario, permite al litigante ofrecer pruebas para justificar sus defensas (o acciones); sin exigir formalismos exagerados que impidan el efectivo ejercicio de ese derecho fundamental.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.1o.A.C.6 C (10a.)

Amparo directo 659/2014. Iris Liliana Villanueva de la Fuente. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Secretario: Sergio Vallejo Malvaez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBAS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. CONFORME AL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SON ADMISIBLES LAS QUE TIENDEN A DESESTIMAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Si la parte que recurre la sentencia dictada en la audiencia constitucional, adjunta al escrito de agravios diversas pruebas (documentales) tendentes a combatir el sobreseimiento decretado en primera instancia, dichos medios de prueba son inadmisibles en términos del artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo que establece que la única excepción a la regla general, consistente en que el órgano revisor solamente debe tomar en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, es que aquéllas tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior es así, porque al haberse celebrado ésta y dictado la sentencia correspondiente, el modelo del juicio de amparo asume que, previamente se respetaron las reglas esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el que se haya dado vista a las partes con el contenido de los informes justificados y que estuvieron en aptitud de aportar pruebas; de ahí que –en congruencia con ese modelo procesal– únicamente se contemple la excepción prevista en el mencionado artículo 93, fracción VII, en cuanto a la valoración de pruebas en la revisión que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia, al tratarse de una situación en la que el juicio concluye sin que se agote el procedimiento, de manera que en esos casos no existe certeza de que las partes estuvieren en aptitud de aportar pruebas o manifestar sus motivos de

inconformidad directamente al Juez de Distrito; sin que se descarte la posibilidad de que resulte aplicable el criterio jurisprudencial relativo a pruebas ofrecidas con el carácter de supervenientes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.P.6 K (10a.)

Recurso de reclamación 8/2014. 24 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Mejía Ponce de León. Secretario: Francisco Marroquín Arredondo.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Q

QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA PROVEER SOBRE EL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI AQUÉLLA JUSTIFICA QUE REALIZÓ LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA TURNARLA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. Si el recurso de queja se interpone con fundamento en el artículo 97, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, contra la omisión de la autoridad responsable para proveer sobre el trámite de la demanda de amparo directo, pero si ésta acredita que levantó ese estado de abstención, al realizar las actuaciones pertinentes para que la demanda fuera turnada al Tribunal Colegiado de Circuito, debe declararse sin materia el recurso, al haberse subsanado esa omisión y obtenerse el fin buscado, ya que con ello desaparece el posible perjuicio que pudo causarse al promovente con la abstención de la responsable, sin perjuicio de que, en su caso, se le aplique la multa prevista en el artículo 260, fracción IV, de la citada ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
XX.2o.3 K (10a.)

Queja 7/2015. Agustín de Jesús Martínez Borraz. 13 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretaria: Marylin Ramírez Avendaño.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

R

RADIODIFUSIÓN. FINALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS RELACIONADAS CON CONTENIDOS. La resolución indicada, por la cual se determinó la existencia de un agente económico preponderante en el sector de radiodifusión y se le impusieron medidas relacionadas con contenidos, impidiéndole adquirirlos de manera exclusiva para su transmisión dentro del territorio nacional, así como realizar arreglos entre dos o más agentes económicos para adquirir, conjuntamente, derechos de transmisión de contenido audiovisual a efecto de obtener mejores términos de compra (clubes de compras) sin la previa autorización del instituto mencionado, tiene como finalidad: a) que los contenidos estén a disposición de los diferentes canales de radiodifusión –televisión– o de quien lo solicite; b) la nivelación de la competencia o que no se afecte el proceso competitivo en el sector de la radiodifusión; c) limitar el poder del agente económico preponderante en el mercado de la radiodifusión, evitar fortalecer su posición frente a las audiencias y que limite a otros participantes en el mercado para competir de manera efectiva; y, d) que no se excluya a los competidores, es decir, que el titular de los contenidos pueda negociar con éstos o evitar que se reduzcan las alternativas disponibles de las audiencias.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.46 A (10a.)

Amparo en revisión 57/2014. Televisa, S.A. de C.V. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RADIODIFUSIÓN. LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS, NO AFECTA LA LIBERTAD CONTRACTUAL DE QUIENES NO PERTENEZCAN A ÉSTE Y SE DEDIQUEN A LA REALIZACIÓN O PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS. La resolución del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones que determinó la existencia de un agente económico preponderante en el sector de radiodifusión y le impuso medidas relacionadas con contenidos, no afecta la esfera jurídica de las personas físicas y morales que no pertenezcan a ese grupo de interés económico y se dediquen a la realización o producción de aquéllos, pues no les impide ejercer su libertad contractual o de negociación, dado que no restringe su derecho a enajenar o comercializar la producción de sus contenidos con terceros, esto es, no les impone una limitante para escoger a la persona con quien puedan realizar su actividad, ni coarta su facultad para convenir en cuanto a la forma y contenido del contrato, términos y condiciones, esto es, cuándo, cómo y con quién pactar.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.47 A (10a.)

Amparo en revisión 57/2014. Televisa, S.A. de C.V. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RADIODIFUSIÓN. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU RESOLUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR, AL SER OBLIGATORIAS PARA LOS MIEMBROS DE ÉSTE, SUS CAUSAHABIENTES O CESIONARIOS DE SUS DERECHOS O QUIENES RESULTEN DE REESTRUCTURAS CORPORATIVAS O MODIFICACIONES ACCIONARIAS DERIVADAS DE CONCENTRACIONES DE CUALQUIER TIPO A AGENTES VINCULADOS CON ÉL, SON IDÓNEAS Y RAZONABLES PARA ALCANZAR LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PROPIA RESOLUCIÓN. Las medidas impuestas por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la resolución

mencionada, al ser obligatorias para los miembros del agente económico preponderante, sus causahabientes o cesionarios de sus derechos o quienes resulten de reestructuras corporativas o modificaciones accionarias derivadas de concentraciones de cualquier tipo a agentes vinculados con él, son razonables e idóneas para alcanzar la finalidad de la propia resolución, derivada del artículo octavo transitorio, fracción III, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 y evitar actos o prácticas susceptibles de calificarse como un abuso del derecho o fraude a la ley, en virtud de que tienen como objetivo específico que la resolución logre vigencia real y eficacia práctica, así como prevenir que el agente económico preponderante, a través de sus subsidiarias, filiales o cualquier miembro del grupo de interés económico, adopte conductas, mecanismos o actitudes encaminadas a evadir su cumplimiento, a fin de mantener un alto nivel de control sobre la distribución y transmisión de contenidos audiovisuales relevantes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.45 A (10a.)

Amparo en revisión 57/2014. Televisa, S.A. de C.V. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONERSE CONTRA LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y, EVENTUALMENTE, PROCEDE SU AMPLIACIÓN SI SE PRESENTA EN TIEMPO, PERO NO SU DUPLICIDAD CONTRA LA MISMA DETERMINACIÓN [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013]. De la interpretación del artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se advierte que cualquiera de las partes en el amparo indirecto que resienta una afectación por la concesión o negativa de la suspensión provisional puede interponer, por una sola vez, el recurso de queja ahí previsto; y, eventualmente permite su ampliación si se presenta en tiempo, pero no contempla su duplicidad. De manera que, si en diverso recurso de queja se impugna

la misma determinación, debe desecharse el presentado en ulterior momento, aun cuando sea interpuesto dentro del término concedido para ello, en virtud de que dicha ley no establece la posibilidad de promover diversidad de recursos contra la misma resolución pues, estimar lo contrario, trastocaría la seguridad jurídica de las partes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.
(I Región)1o.2 K (10a.)

Queja 309/2015. Planta Vitalizadora del Golfo, S.A. de C.V. 25 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Manuel Carbajal Hernández, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Julia Mercedes Díaz Corza.

Queja 346/2015. Construcciones Solvel, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Andrea Zambrana Castañeda. Secretario: José Fabián Romero Gómez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AUNQUE SÓLO PRETENDA IMPUGNARSE LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El precepto citado prevé la procedencia del recurso de queja en el juicio de amparo indirecto, contra las resoluciones que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o puedan ser excesivas o insuficientes, sin que dentro de éstas se encuentren las que concedan la suspensión definitiva, aunque sólo pretenda impugnarse lo relativo a la fijación de la garantía para que surta efectos, establecida en los artículos 132 y 136, segundo párrafo, del ordenamiento mencionado, pues al constituir ese aspecto un requisito de efectividad de la medida cautelar, es parte de aquella resolución, de la que no puede desvincularse, como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 25/94, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, página 13, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES PROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN Y NO EL DE QUEJA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE, AUNQUE SÓLO SE IMPUGNE LA GARANTÍA A LA QUE SE SUJETÓ SU EFECTIVIDAD.". De ahí que dicho recurso sea improcedente en la hipótesis descrita, aunado al hecho de que el legislador, al disponer en el artículo 81,

fracción I, inciso a), de la propia ley, la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones que nieguen o concedan la suspensión en el amparo indirecto, determinó el medio idóneo para controvertir la garantía fijada en éstas, máxime que de no asumir dicho criterio, por una parte, se llegaría al absurdo de considerar la existencia de dos recursos contra una misma determinación y, por otra, la procedencia de éstos se sujetaría a lo expuesto por los recurrentes en sus agravios y no a la materia de la resolución que pretendan impugnar, lo cual es contrario al principio de certeza jurídica que toda ley debe otorgar a sus destinatarios.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.2o.A.1 K (10a.)

Queja 175/2014. Jorge Fragoso Ramírez. 13 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Mónica Alejandra Soto Bueno. Secretario: Rodrigo Courtois Yannini.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ. Del análisis integral de los artículos 3o., 21, 26, fracción II, incisos a) y b), 28, fracción II, 88 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de autoridades responsables y terceras interesadas (salvo en el caso de particulares) que tienen su domicilio oficial fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, el legislador determinó que la comunicación entre éste y las citadas autoridades, se llevaría a cabo por correo certificado con acuse de recibo, sin que estén obligadas las autoridades a señalar un domicilio en aquél, ni a presentar directamente ante el órgano jurisdiccional las promociones que realicen, pues no les es aplicable el artículo 23 de la ley mencionada, ya que éste se dirige al quejoso respecto de la presentación de la demanda, y al tercero interesado, tratándose de la primera promoción que se presente en el juicio de amparo. En consecuencia, si el recurso de revisión promovido por alguna de las citadas autoridades –que tienen su domicilio oficial fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo–, se remite por correo certificado con acuse de recibo a través de la oficina de Correos de México, ubicada en el lugar de residencia de dicha autoridad, debe tenerse

como fecha de presentación, la que aparezca como la del depósito en la citada oficina, y no aquella en la que éste lo recibió.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.
(I Región)4o.3 K (10a.)

Amparo en revisión 7/2014 (cuaderno auxiliar 329/2014) del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. 24 de abril de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Luis Almazán Barrera. Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretaria: Joanna Karina Perea Cano.

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada el viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, página 1286, se publica nuevamente con la modificación en el texto que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.

La parte conducente del amparo en revisión 7/2014 (cuaderno auxiliar 329/2014) y el voto particular del Magistrado Luis Almazán Barrera, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, páginas 1238 y 1282, respectivamente.

Esta tesis se republicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DECRETA LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE UN ELEMENTO POR INCUMPLIR UN REQUISITO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN. El artículo 39, último párrafo, de la Ley de la Policía Federal es claro al establecer que las resoluciones sancionatorias que emita el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, al decidir los procedimientos disciplinarios, son susceptibles de impugnación, vía recurso de revisión, es decir, acota la procedencia de ese medio de defensa a aquellas resoluciones que den por culminados los procedimientos instaurados con motivo de la presunta existencia de causas de responsabilidad administrativa, lo que se corrobora con los diversos 26, fracción XIX, de la legislación invocada, así como 13, fracción XX y 42, fracción XLVIII, de su reglamento. De ahí que, como la Ley de la Policía Federal distingue la existencia de dos tipos de procedimientos que se originan por razones diferentes, el primero, derivado del incumplimiento por los integrantes de ese cuerpo policial de los requisitos de permanencia en la institución

y, el segundo, que encuentra su génesis en la infracción al régimen disciplinario, que se relaciona con la investigación de causas de responsabilidad administrativa, debe concluirse que tal medio de defensa es improcedente contra la resolución que decreta la separación del elemento policial por incumplimiento de uno de los requisitos de permanencia, puesto que, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución en la que se determinó la separación del cargo que venía desempeñando un agente de la policía no puede considerarse como derivada de una responsabilidad administrativa que amerite la imposición de una sanción, pues no constituye una responsabilidad para el funcionario, ya que no se le imputa una conducta irregular, esto es, no se le sanciona por haber cometido algún acto considerado como infracción a las obligaciones que le impone la ley, sino que es separado de su puesto por no reunir los requisitos de permanencia exigidos en la corporación policial para prestar el servicio que le es demandado de forma satisfactoria y que garantizan a la sociedad el cumplimiento eficaz de las labores que realiza.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.96 A (10a.)

Amparo directo 878/2014. Sergio Emmanuel Martínez López. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Diego Alejandro Ramírez Velázquez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REDUCCIÓN DE LA PENA EN DELITOS GRAVES. EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROCEDE AUN CUANDO EL SUJETO ACTIVO HAYA CONFESADO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO EN VÍA DE PREPARATORIA, SIEMPRE QUE ÉSTA FUERE SU PRIMERA OPORTUNIDAD DE DECLARAR EN TORNO AL HECHO IMPUTADO. En la jurisprudencia 1a./J. 13/2011 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que para la procedencia de lo previsto en el citado numeral, es necesario que exista la confesión del sujeto activo en la comisión del delito, esto es, la aceptación de la integridad de los elementos constitutivos del tipo penal materia de la imputación. En esas condiciones, aun cuando el numeral 71 Ter del Código Penal para el Distrito Federal establezca que para acceder al beneficio de la reducción de la pena en una tercera parte, con motivo de la confesión del indiciado, tratándose de delito grave, ésta debe realizarse ante el Ministerio Público y ratificarse

ante el Juez en la declaración preparatoria, sin embargo, se advierte que lo que tutela el citado precepto, es que la confesión se rinda de manera voluntaria en su primera declaración y que, además, se hayan cumplido los requisitos establecidos en los artículos 136 y 249 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; de ahí que si el indiciado no declaró ante el Ministerio Público por no haberse logrado su comparecencia, localización y presentación, pero ante el Juez del proceso, al rendir su declaración preparatoria confiesa los hechos atribuidos y ello lo ratifica ante la autoridad judicial en ampliación de su deposado, es procedente la disminución de la pena conforme al principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se infiere su voluntad de aceptar los hechos en la primera oportunidad que tuvo de declarar en relación con el evento delictivo que se le atribuye, aun cuando no haya sido ante la autoridad ministerial.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P.33 P (10a.)

Amparo directo 301/2014. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: Verónica Mendiola Zurita.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2011(10a.) citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro VIII, Tomo 1, mayo de 2012, página 944, con el rubro: "REDUCCIÓN DE LA PENA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 71 TER Y 71 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES. SU DERECHO DE SER OÍDOS PUEDE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA VIDEOLLAMADA, VÍA *SKYPE*, EN SALVAGUARDA DE SU INTERÉS SUPERIOR, CUANDO LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL LUGAR DEL JUICIO Y SU RESIDENCIA LE OCASIONE VIAJAR Y REALIZAR GASTOS. Dentro de los derechos que corresponden a los menores, se encuentra el de expresar su opinión en los asuntos que les afecten, para lo cual, se les debe tomar su parecer; en tal virtud, el derecho de los menores a participar en procedimientos jurisdiccionales constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor cuya tutela debe observarse en busca de brindarles una protección adicional, la cual debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses. En cada caso, tiene que ponderarse la intervención del menor, atendiendo a su edad, condiciones de madurez y si éste tiene suficiente juicio. El derecho de escuchar

a un menor se encuentra consagrado en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el 41, apartado A, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora bien, cuando la distancia existente entre el lugar del juicio y la residencia de un menor es considerable, en salvaguarda de su interés superior se hace necesario evitar que tenga que viajar y realizar los gastos respectivos, y la exigencia de que el menor sea oído puede cumplirse haciendo uso de medios electrónicos, entre otros, mediante la vía *skype* que permite la comunicación a distancia por medio de una videollamada, con la finalidad de que el menor sea escuchado en juicio a efecto de determinar el régimen de visitas y convivencias con sus progenitores. El hecho de pretender que un menor sea trasladado al juzgado de lo familiar de un país a otro, con la única finalidad de ser escuchado, trastoca su estabilidad y provoca un incumplimiento a lo ordenado en la Constitución Federal, que impone a toda autoridad promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por ésta y los tratados internacionales, entre los que se encuentra el interés superior de los menores.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.174 C (10a.)

Amparo en revisión 191/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Montserrat C. Camberos Funes.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REMATE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA, POR SER AUTÓNOMA Y AJENA A LA COSA JUZGADA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [MODIFICACIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.13o.C.7 K (10a.)]. Este órgano jurisdiccional emitió la tesis I.13o.C.7 K (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1941, de título y subtítulo: "REMATE. LA NEGATIVA DE APROBARLO O EL ACUERDO QUE LO DESAPRUEBA Y SUS CONSECUENCIAS CONSTITUYEN UN CASO DE EXCEPCIÓN QUE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, AL AFECTAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la resolución que desaprueba el remate, lleva a modificar el criterio mencionado, ya que de conformidad con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra los actos dictados después de concluido el juicio

contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida ésta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo. Sin embargo, nuestro Máximo Tribunal del País consideró que procede el juicio de amparo indirecto cuando se trate de actos que afecten derechos sustantivos del quejoso, tengan autonomía propia y sean ajenos a la cosa juzgada; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se busque –directamente– impedir el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquiere la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse. Lo que se actualiza en tratándose de la resolución del tribunal de alzada que confirmó la determinación del Juez a quo de no aprobar el remate, porque constituye un acto ajeno a la cosa juzgada, goza de autonomía propia, es un acto de imposible reparación, al afectar directamente el derecho sustantivo del quejoso y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por lo cual, respecto a éste procede el amparo indirecto.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.C.16 C (10a.)

Queja 220/2014. Grupo Finterra, S.A. de C.V., S.F. de O.M., Entidad no Regulada. 26 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Ramírez Sánchez. Secretaria: Eva Viviana Martínez Trujillo.

Nota: Esta tesis modifica el criterio sostenido por el propio tribunal, en la diversa I.13o.C.7 K (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. LA NEGATIVA DE APROBARLO O EL ACUERDO QUE LO DESAPRUEBA Y SUS CONSECUENCIAS CONSTITUYEN UN CASO DE EXCEPCIÓN QUE ACTUALIZA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, AL AFECTAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1941.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RENTAS. SI EL DEUDOR NO OPONE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES RENTÍSTICAS, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZARLA OFICIOSAMENTE. El artículo 1162 del Código Civil para el Distrito Federal dispone que las rentas no cobradas a su vencimiento quedarán prescritas en cinco años, y el diverso numeral 2

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que la acción procede en juicio, aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título, o causa de la acción; mientras que los numerales 1141 y 1142 de la misma legislación sustantiva, ordenan que la prescripción ganada es renunciable, tanto de forma tácita, como expresa, lo que implica que corresponde al deudor oponer la excepción de prescripción, y que no proceda el estudio oficioso de dicha figura. En consecuencia, si el deudor no opone la excepción de prescripción de pensiones rentísticas, en estricto acatamiento al principio de congruencia, el juzgador se encuentra impedido para analizarla oficiosamente, dado que la prescripción en materia civil es renunciable y puede ser materia de convenio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.176 C (10a.)

Amparo directo 139/2014. Pegaso PCS, S.A. de C.V. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SÓLO CUANDO NO EXISTEN PRUEBAS DIRECTAS QUE SIRVAN DE PARÁMETRO PARA FIJAR SU MONTO, ES APLICABLE EL QUE DE FORMA SUBSIDIARIA ESTABLECE (EN DÍAS MULTA) EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO. De conformidad con los artículos 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y 26, fracción III, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de México, no es dable considerar, para todos los casos, la regla genérica establecida en este último precepto que prevé una condena al pago de la reparación del daño moral de treinta a mil días de multa, pues ésta se aplica cuando de las constancias se advierte que no existe prueba alguna que sirva de parámetro específico para fijar la liquidación por el concepto en cuestión; sin embargo, cuando del sumario se observa que sí se encuentra acreditado dicho monto, por ejemplo, mediante el dictamen en materia de psicología y cotización de tratamiento psicoterapéutico, suscrito por perito en ciencias penales con especialidad en criminología, expedido a favor de cada uno de los pasivos (el cual no fue objetado), del que se advierte la afectación psicológica causada por el delito ocasionado, como el tratamiento psicoterapéutico especializado que cada uno de ellos tendría que llevar, y su

costo, es correcto que la responsable tome en cuenta la aludida cotización para la condena al pago de la reparación del daño moral, ya que la indemnización de éste y, en su caso, el material, incluye el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; de modo que cuando esto aparece probado, la autoridad no debe aplicar los parámetros que prevé (en días multa) de forma subsidiaria el numeral 26 mencionado, pues éstos deben considerarse únicamente ante la inexistencia de pruebas para demostrar el menoscabo específico que ha sufrido el pasivo. Lo anterior, toda vez que el aludido precepto sólo admite una interpretación conforme a la Constitución y prevalencia del principio pro persona a favor de la víctima, y debe estimarse como una medida para garantizar sus derechos cuando no existen pruebas directas que acrediten o evidencien motivadamente el monto real de la indemnización necesaria para resarcir los daños causados; por tanto, su inaplicabilidad, aun mediante control constitucional y convencional, operará si se pretendiera interpretar como una limitante que impidiera cubrir el monto del daño, cuando éste apareciera probado, pues el derecho de la víctima u ofendido debe garantizarse como lo exige la Constitución Federal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
II.2o.P.32 P (10a.)

Amparo directo 173/2014. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre P. Jardón Orihuela.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como

se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.23 K (10a.)

Queja 1/2015. Leticia Hernández Urbina. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
I.1o.A.22 K (10a.)

Queja 1/2015. Leticia Hernández Urbina. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESCISIÓN DE CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA PROBARLA DEBE EXISTIR EL REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DOMICILIO DEL DEUDOR, SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2082 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). El precepto citado establece una regla general consistente en que el pago de una obligación debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convengan otra cosa o lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley. Cuando no se pactó lugar de pago en el contrato de compraventa respectivo ni lo contrario derive de la naturaleza de la obligación o de la ley, para que el deudor se constituya en mora debe ser requerido en su domicilio por el acreedor porque es una condición, requisito o elemento de la procedencia de la acción rescisoria. En ese contexto, para acreditar que el deudor incurrió en mora, de oficio la autoridad debe analizar los elementos de la acción rescisoria y deberá tomar en cuenta si existió o no pacto expreso de las partes en cuanto al lugar de pago de la obligación y que no basta que estén señalados en el contrato de mérito los domicilios de las partes en que puedan ser notificadas para los efectos del cumplimiento del mismo porque el lugar de pago de las obligaciones debe pactarse de modo expreso. En caso de no haber pacto expreso opera la regla general en supletoriedad de la voluntad de las partes, para establecer que el lugar de pago es el domicilio del deudor, lo que arroja para el acreedor la carga de probar que previo a la presentación de la demanda requirió el pago al deudor para demostrar la mora y que la acción rescisoria sea procedente. Tratándose del cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el órgano de alzada debe pronunciarse al respecto y resolver con plenitud de jurisdicción la controversia planteada por no existir reenvío a la apelación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.690 C (9a.)

Amparo directo 796/2007. María de los Ángeles Hernández Rosas y otros. 3 de abril de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

Notas: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis difundida en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 1190, se publica nuevamente con la aclaración realizada en su texto, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Primera Sala en la sentencia que recayó a la contradicción de tesis 22/2014, en el sentido de que aquél fuera ajustado en congruencia con el criterio judicial sostenido en el amparo directo 796/2007, señalado como su precedente.

La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 22/2014 citada, aparece publicada en la página 485 de esta *Gaceta*.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR UN MOTIVO RAZONABLE DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA, CONFORME AL ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De conformidad con el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de confianza son susceptibles de despido si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, a pesar de que no coincida con las causas justificadas de rescisión previstas por el numeral 47 de la citada ley. Por tanto, para que se dé la causa de rescisión basta que el motivo aducido por el patrón sea razonable, aun cuando no configure una falta de probidad, ni sea de tal naturaleza que tenga que ser unánimemente aceptado. En ese entendido, si la demandada acredita que cumplió con el artículo 47 de la aludida ley, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, al haber entregado personalmente al trabajador de confianza, el aviso escrito que contiene la fecha y la causa de la rescisión de la relación laboral que se le atribuye, consistente en que su esposa, con quien contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y su hijo, crearon una empresa durante la época en que el actor laboraba para la empresa patrón, cuyo objeto social, en parte, es el mismo al de aquélla, que proporcionó servicios y productos a un mismo cliente, es obvio que existe un motivo razonable y objetivo que da pauta a rescindir la relación de trabajo, pues en términos del numeral 194 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, el referido trabajador tiene derecho a las ganancias obtenidas por la empresa de la que su esposa es socia; por lo que en esta hipótesis el despido del trabajador de confianza es justificado, porque se genera un conflicto de intereses entre la empresa para la que labora y la empresa del familiar, que falta al sentimiento de lealtad implícito en todo contrato de trabajo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.3o.T.27 L (10a.)

Amparo directo 507/2014. Argelio Guerra Guerra. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Myrna Gabriela Solís Flores, secretaria de tribunal autorizada por

el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos de los artículos 26, párrafo segundo, en relación con el 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: José Ignacio Montoya Zablah.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE. El citado precepto local, en la porción normativa que establece que las resoluciones dictadas por los Jueces del Estado competentes, en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, que contemplan los artículos 474, 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, son irrevocables y causan ejecutoria, es inconvencional y, por tanto, debe inaplicarse por contrariar el derecho a recurrir la sentencia de primera instancia ante un Juez o Tribunal Superior (doble instancia judicial), reconocido por los artículos 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues se obliga al gobernado a acudir al juicio constitucional en la vía directa, sin que previamente pueda agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 295, fracción I, del Código de Procedimientos Penales mencionado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.14 P (10a.)

Amparo directo 395/2014. 11 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ana María Nava Ortega, Magistrada interina. Secretario: Enrique Serano Pedroza.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92). El derecho a la indemnización no forma parte del caudal hereditario del *de cujus*, sino que deriva de la afectación sufrida por los familiares cercanos; ya que considerarlo de otra manera entrañaría aceptar que el derecho a la indemnización forma parte del patrimonio de la víctima fallecida, lo que ha sido rechazado unánimemente por la doctrina, y que el albacea debe repartir el monto respectivo entre cada heredero, además

de sujetar el ejercicio de la pretensión a la tramitación, así sea parcial, de un juicio sucesorio, lo cual redundaría en obstruir el acceso a la pronta impartición de justicia, con infracción al principio *pro actione* relacionado con el de pro persona adoptado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme con los cuales la optimización del derecho a la jurisdicción puede lograrse si se facilita la acción. No es óbice a lo considerado, la existencia de la jurisprudencia 3a./J. 21/92, de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Número 59, Octava Época, noviembre de 1992, página 18, de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS DE LA VÍCTIMA SON LOS LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA. (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1915 Y 1836 DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL ESTADO DE JALISCO, A PARTIR DE SUS REFORMAS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, RESPECTIVAMENTE).", toda vez que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor al día siguiente, debe estimarse que perdió su vigencia ante las reformas constitucionales de derechos humanos en el país, con base en la cual se incorporaron, entre otros, el derecho humano de acceso a la justicia y se establecieron los principios *pro actione* y pro persona; consecuentemente, los herederos potenciales de la víctima están legitimados para reclamar la indemnización relativa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.191 C (10a.)

Amparo directo 508/2014. Autobuses Estrella Blanca, S.A. de C.V. y otra. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTENTADOS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIONES II, PÁRRAFO PRIMERO, INCISO D), III, PÁRRAFO ÚLTIMO, IV, V Y VI, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA, DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA NOTIFICACIÓN AL CONGRESO LOCAL DE LA SENTENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE DECLARÓ LA INVALIDEZ DE DICHAS PORCIONES NORMATIVAS Y LA ENTRADA

EN VIGOR DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE OCTUBRE DE 2012, DEBEN DECLARARSE NULOS. El artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 21732/LVII/06, fue materia de análisis por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la controversia constitucional 19/2007. En sesión de 16 de febrero de 2010 se resolvió, por unanimidad de once votos, declarar inválidas sus fracciones II, párrafo primero, inciso d), III, párrafo último, IV, V y VI, inciso c), al considerar que se configuraron violaciones graves en el proceso legislativo que culminó con la emisión del decreto mencionado. La ejecutoria correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2010 y se notificó al Congreso del Estado de Jalisco el 19 de febrero del mismo año, momento en el cual surtió efectos la declaratoria de invalidez, lo que muestra que desde esta última fecha hasta que el precepto citado fue reformado mediante Decreto número 24120/LIX/12, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 18 de octubre de 2012, quedaron sin vigencia las fracciones aludidas. Por tanto, como dicha declaratoria de invalidez tiene el carácter de jurisprudencia y, en consecuencia, resulta obligatoria para los tribunales del país, los procedimientos administrativos sustentados en las porciones normativas del propio numeral 69 declaradas inválidas, durante el lapso comprendido entre la notificación de la sentencia del Alto Tribunal y la entrada en vigor de su reforma de 2012, deben declararse nulos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.A.20 A (10a.)

Amparo directo 11/2015. César Alejandro Moya Ibarra. 24 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Eunice Sayuri Shibya Soto.

Nota: La ejecutoria relativa a la controversia constitucional 19/2007 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 1635.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL VICIO QUE ORIGINÓ LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO DEBE SER SUBSANADO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA COMO CONDICIÓN PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. De conformidad con los criterios jurisprudenciales 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011,

aplicables por analogía tratándose del recurso de revisión regulado en la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, dicho medio de defensa es improcedente contra las sentencias en que el vicio de ilegalidad que da sustento a la declaratoria de nulidad de la resolución impugnada sea estrictamente formal y, por ende, no se hubiera realizado un análisis sobre la existencia de un derecho o la exigibilidad de una obligación, supuesto que se actualiza en aquellos casos en que, con motivo de la anulación del acto combatido, la autoridad demandada quede sujeta a subsanar alguna irregularidad en la propia resolución o en el procedimiento que le dio origen como condición para estar en aptitud de emitir un pronunciamiento de fondo, pues ello es reflejo de que no se analizó la pretensión material del actor, sino que se detectó un vicio que imposibilitó su examen.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.98 A (10a.)

Revisión administrativa (Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal) 197/2014. Procurador Fiscal del Gobierno del Distrito Federal. 11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REVISIÓN EN AMPARO. EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO. El artículo 10, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé la forma en la que se acredita la representación del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad, cuando les asista el carácter de terceros interesados, para lo cual, remite a las reglas que prevé el precepto 9o. del ordenamiento citado, el cual regula la forma en que serán representadas las autoridades responsa-

bles. Conforme a tales consideraciones, si bien el delegado es una persona autorizada para actuar en nombre y representación de la autoridad responsable dentro del juicio de amparo, ello no implica que la representación de la autoridad tercero interesada en términos del artículo 10, referido, que remite al diverso 9o. mencionado, lleve implícita la facultad de ésta de autorizar delegados conforme a ese numeral, ya que esa remisión legal sólo tuvo por efecto establecer las reglas para determinar la representación en el juicio, mas no las facultades para designar delegados, lo que incluso sería incompatible con el artículo 12 de la propia ley, que establece la facultad del quejoso y del tercero interesado de autorizar abogados para oír y recibir notificaciones en su nombre y para interponer los recursos que procedan. Por tanto, el delegado de la autoridad tercero interesada carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.

(I Región)4o.5 K (10a.)

Amparo en revisión 228/2014 (cuaderno auxiliar 1117/2014) del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. Coordinador Jurídico del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y otras. 15 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Fabián García Miranda, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretario: Manuel Torres Cuéllar.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

S

SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EN CUANTO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO, PUEDE SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS NOTARIOS PÚBLICOS. Si el notariado es una función de orden público, la cual está bajo la potestad del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán por conducto de la Secretaría de Gobierno y su ejercicio se encomienda a los notarios públicos, aun en ausencias temporales del gobernador, el secretario de Gobierno, actuando como encargado del despacho del Poder Ejecutivo, puede aplicar las diversas sanciones administrativas por violación a la ley de la materia, según la gravedad y circunstancias del caso (amonestación, multa, suspensión del cargo hasta por un año y cese), porque cuenta con facultades sin restricción alguna, en virtud de que la Constitución Política de la entidad no distingue ni limita a dicho encargado del despacho para ejercer todas las facultades de su titular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.A.T.47 A (10a.)

Amparo en revisión 50/2014. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y otros. 30 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Lucía Elena Higareda Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 37, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LABORAL NO VIOLA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (ORDENAMIENTO ABROGADO POR EL REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y APLICACIÓN DE SANCIONES, PUBLICADO EN EL DIA-

RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN VIGOR A LOS TRES MESES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN). Si bien el precepto citado no prevé una sanción por el exceso en el plazo que establece para dictar la resolución en el procedimiento administrativo correspondiente, dicha disposición no debe examinarse aisladamente, sino en el contexto normativo en que se inserta, conforme al cual las facultades de las autoridades para dictar tal resolución pueden caducar si no se emite y notifica en el plazo de treinta días contado a partir de la expiración del diverso en que se debe dictar dicha resolución, en términos del numeral 60, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así, el artículo 37, último párrafo, del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral (ordenamiento abrogado por el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014, en vigor a los tres meses siguientes a su publicación) no viola el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no deja en estado de incertidumbre al particular, quien tiene la certeza plena de que el procedimiento debe resolverse (y notificarse el fallo correspondiente) a más tardar en el plazo que establece el numeral 60, último párrafo, señalado porque, de lo contrario, caducará la facultad de la autoridad administrativa, por lo que el hecho de que el artículo reglamentario no establezca una sanción específica en cuanto al exceso del plazo de tres días para dictar la resolución, no permite la actuación arbitraria de la autoridad ni genera incertidumbre al particular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.A.88 A (10a.)

Amparo directo 402/2014. 25 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.

Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEGURIDAD PÚBLICA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE ESE TIPO DE CORPORACIONES, ASÍ COMO

DE SUPRIMIR LA INSCRIPCIÓN DE SU SEPARACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, SE DEBE CONSIDERAR QUE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ INJUSTIFICADA TAL DECISIÓN CONSTITUYE, POR SÍ, UNA FORMA DE REPARACIÓN. De la interpretación del artículo 60 y demás relativos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se deduce que no es procedente suprimir la inscripción de la separación de un agente del Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, sino que únicamente se debe asentar que la decisión fue considerada ilegal. No obstante, la existencia de un registro en el que se haga constar que una persona fue separada de su cargo, por no acreditar una evaluación de control de confianza, necesariamente incide en bienes jurídicos relevantes como el honor y la buena fama; con mayor razón, si la decisión de mérito fue declarada nula de manera absoluta y, aun así, subsiste la inscripción correspondiente. Por esa razón, se debe tomar en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en diversos casos, que las sentencias constituyen, por sí, una forma de reparación, adicional a las distintas medidas que se ordenen en beneficio de la parte favorecida. Ese criterio implica el reconocimiento de que las sentencias no solamente exponen el sentido en que debe culminar una contienda, pues si bien es cierto que su efecto inmediato es dar solución a la controversia, también lo es que constituyen una declaración jurisdiccional sobre la regularidad del actuar del Estado. Lo anterior también es aplicable a los juicios en materia administrativa, ya que guardan coincidencia con aquéllos en el sentido de que el juzgador debe analizar si las determinaciones adoptadas por algún órgano de gobierno vulneraron los derechos de un particular. Entonces, si ese tipo de resoluciones, al causar estado, se convierten en la verdad legal, de modo que su contenido no puede ser invalidado, resulta que, en relación con la afectación psíquica y social que resintió el justiciable, el fallo constituye un verdadero reconocimiento, firme e inmutable, de que la remoción de su cargo fue ilegal, mientras que el registro de esa decisión sólo es susceptible de entenderse como un aspecto meramente histórico que se conserva por razones instrumentales, y que de ningún modo acredita ni determina la veracidad de las supuestas anomalías que dieron lugar a la separación del elemento policiaco.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.95 A (10a.)

Amparo directo 840/2014. Francisco Javier Corrigeux Rodríguez. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.

Amparo directo 884/2014. Beatriz Cruz Rodríguez. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Ulises Ocampo Álvarez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA. El régimen excepcional creado para los miembros de las corporaciones de seguridad pública, en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integró al orden jurídico nacional la prohibición absoluta de reincorporarlos, aun cuando un órgano jurisdiccional determine que la separación fue ilegal, con independencia de la razón que motivó el cese. Por otra parte, de los artículos 5, fracciones X y XIII, 60, 74 y 85, fracción I, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se desprende que deberán quedar inscritas en un registro nacional tanto la separación de un miembro de la corporación de seguridad pública como, en su caso, la anulación de la resolución respectiva, y que en toda institución policial (federal, local o municipal) se deben consultar, en el registro referido, los antecedentes de quienes pretendan ingresar al servicio. Lo expuesto demuestra que el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública y las bases de datos semejantes forman parte de los instrumentos creados por el legislador federal para cumplir los objetivos que se pretendieron alcanzar mediante el establecimiento de las condiciones particularmente excepcionales a las que fueron sujetos los miembros de las corporaciones policiales; es decir, a través de ese mecanismo se busca evitar que quienes han sido separados de una institución de esa naturaleza puedan reingresar a alguna similar, en cualquiera de los órdenes de gobierno, ya que implicaría desacatar la prohibición absoluta contenida en la Constitución. En consecuencia, es improcedente ordenar la eliminación de la inscripción de la separación de un funcionario de seguridad pública del registro mencionado, dado que el deber de los tribunales de velar por la observancia de la Carta Magna también implica procurar la aplicación de las normas secundarias que hacen posible no quebrantar ese orden normativo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.94 A (10a.)

Amparo directo 840/2014. Francisco Javier Corrigeux Rodríguez. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.

Amparo directo 884/2014. Beatriz Cruz Rodríguez. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Ulises Ocampo Álvarez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SENTENCIAS DE AMPARO. LOS EFECTOS DE LAS QUE SE DICTAN EN LOS JUICIOS QUE DECIDEN SOBRE DERECHOS O INTERESES SUPRAINDIVIDUALES O INDIVISIBLES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE EXTIENDEN A TODOS LOS MIEMBROS DE ESE COLECTIVO. Los efectos de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo que deciden sobre derechos o intereses supraindividuales o indivisibles de los agentes económicos que participan en el mercado de las telecomunicaciones, en su carácter de obligados o beneficiados con una regulación asimétrica, no sólo vinculan a las partes, sino que, dada la naturaleza de dichos derechos, se extienden a todos los miembros de ese colectivo. Por esa razón, es innecesario llamar a juicio, oficiosamente, a todos los concesionarios vinculados o relacionados con el acto administrativo reclamado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.50 A (10a.)

Queja 108/2014. TV Azteca, S.A. de C.V. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI UN JUEZ DE GARANTÍA, EN AUXILIO DEL QUE SIGUE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL QUEJOSO SEÑALA A AMBOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, PROCEDE DECRETAR AQUÉL POR LO QUE HACE A QUIEN ACTUÓ EN AUXILIO, SIN NECESIDAD DE OTORGARLE LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN TANTO QUE DICHO SOBRESEIMIENTO NO LE CAUSA PERJUICIO. Si un Juez de garantía, en virtud de un exhorto y por haberse ejecutado una orden de aprehensión dentro de su jurisdicción, en auxilio del que sigue la causa penal de origen, dictó el auto de vinculación a proceso, y el quejoso, al promover el juicio de amparo indirecto, señala a ambos juzgadores como autoridades responsables, procede decretar el sobreseimiento

en el juicio por lo que hace al Juez de garantía que actuó en auxilio, atento a que no le resulta el carácter de autoridad responsable, pues sería este último (Juez de garantía ante quien se sigue la causa), el único que estaría en condiciones de cumplir las determinaciones que eventualmente llegaran a dictarse en el juicio de amparo, siendo innecesario otorgar al quejoso la vista a que se refiere el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, habida cuenta que dicho sobreseimiento no le causa perjuicio, porque no recae en el acto de autoridad que reclamó, lo que garantiza el respeto irrestricto a su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XVII.2o.P.A.13 P (10a.)

Amparo en revisión 393/2014. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretaria: Araceli Delgado Holguín.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INCORRECTO DECRETARLO POR NEGATIVA DE ACTOS, AL NO CONSTITUIR ÉSTA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Es incorrecto sobreseer fuera de la audiencia constitucional por negativa de los actos reclamados de las autoridades responsables, sin respetar el plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues esta negativa no constituye una causa notoria e indudable de improcedencia, como lo exige la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino una causa de sobreseimiento que pudiera ser desvirtuada, en tanto que está sujeta a prueba hasta el momento de la celebración de la audiencia constitucional. De ahí que, procede revocar dicha determinación y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.2 K (10a.)

Amparo en revisión 266/2014. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO

DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO. De los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 12 de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", se advierte el derecho fundamental a la protección de la salud y su pleno ejercicio, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a prestar el servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción. Consecuentemente, si quien fue dado de baja en definitiva del servicio como elemento de seguridad pública, presenta y se admite su demanda de amparo, en la cual aduce la inconstitucionalidad de ese acto (baja) y solicita la suspensión para que se le sigan prestando los servicios de salud, ésta debe concedérsele en términos del numeral 47 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, esto es, por el lapso de seis meses a partir de la fecha en que fue dado de baja, lo cual no contraviene el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado y no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.A.19 A (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 91/2015. Jaime Sebastián Alonso Hernández. 24 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretario: José Guadalupe Castañeda Ramos.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ DIRIGIDA AL JUEZ CONSTITUCIONAL Y NO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Es incorrecta la interpretación que hizo el Juez de Distrito del artículo 149 de la Ley de Amparo, conforme a la cual indebidamente concluyó que hubo desacato a la suspensión provisional porque como en el caso la celebración de la asamblea estaba a cargo de un particular, entonces la autoridad responsable estaba obligada a

ordenarle la inmediata paralización de ese acto y a tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional. Lo que se afirma, porque si bien es cierto que el numeral en cita establece que: "Cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias de dicho acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional.", no menos lo es que al margen de esa literalidad, la obligación ahí contenida es para el Juez constitucional, no para la autoridad responsable, pues es aquél y no ésta a quien le incumbe en exclusiva la determinación de los efectos y alcances de la medida cautelar, so pena de delegar indebidamente funciones constitucionales que están reservadas al Poder Judicial Federal, en las autoridades responsables, quienes se erigirían de esa manera en Juez y parte, lo que quebrantaría la imparcialidad del juicio y desnaturalizaría al auto de suspensión.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.76 K (10a.)

Queja 136/2014. Alejandra Beltrán Torres. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PUEDE DECRETARLA Y COMO COMPLEMENTO EL SOMETIMIENTO A UN PROCESO TERAPÉUTICO (PADRES E HIJOS) A FIN DE RELACIONARSE ADECUADAMENTE, SIN QUE ELLO CAUSE UN PERJUICIO IRREPARABLE AL PROGENITOR, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ LA MEDIDA. Atento al interés superior de la niñez establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si el Juez advierte datos objetivos, consistentes en manifestaciones del propio menor, de las cuales deriven afectaciones sufridas con motivo de la convivencia con alguno de sus progenitores, puede decretar como medida cautelar la suspensión del régimen de visitas y convivencias, y como complemento el sometimiento a un proceso terapéutico (tanto para los padres, como para el menor), que les permita relacionarse de manera adecuada para poder llevar satisfactoriamente dicho régimen. Lo anterior no causa perjuicio irreparable al progenitor respecto del cual se decretó la suspensión provisional del régi-

men de visitas y convivencias, porque dicha medida, al ser complementada con la realización de un proceso terapéutico, tiene como finalidad, precisamente, que el menor quede en aptitud de convivir con sus padres de manera adecuada y sin riesgo para su integridad, además, el "interés superior del menor" implica que se tenga la certeza de que las convivencias no lo afectarán física, emocional o psicológicamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.163 C (10a.)

Amparo en revisión 99/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Por su parte, de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión de una orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el mencionado artículo constitucional, sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; en tanto que el artículo 162, párrafo segundo, de la propia ley establece la posibilidad de que, de acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión tenga como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Ahora bien, la legislación secundaria puede potencializar el derecho humano a la libertad y establecer la posibilidad de dar por concluida la prisión preventiva oficiosa prevista en la Constitución Federal con argumentos de razonabilidad, como sucede con el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que contempla los casos razonables en los que puede finalizar la prisión preventiva, entre ellos, cuando "las condiciones personales del imputado se agraven de tal modo que la prisión

preventiva se traduzca en un caso cruel, inhumano o degradante". No obstante, si en un asunto no obra ningún dato que indique que el quejoso se ubica en alguno de esos supuestos, es evidente que el Juez de Distrito no está en aptitud de aplicar el párrafo segundo del mencionado artículo 162, porque la privación de la libertad es una consecuencia de la resolución, ya sea de orden de aprehensión, reaprehensión o imposición de medida cautelar por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional, y si no se justificó ni siquiera indiciariamente que existieran dichas circunstancias, a fin de decretar la privación de libertad en un domicilio, es correcto el alcance otorgado a la medida suspensional, de acuerdo con el diverso 166, fracción I, de la ley de la materia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.1o.P.A.16 P (10a.)

Queja 15/2015. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Rosa María Chávez González.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

T

TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE DETERMINADOS CONCESIONARIOS UTILICEN UN FORMATO SIMPLIFICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, NO EXCEDE LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA. Como la obligación de presentar la información de la separación contable por servicio, contenida en los artículos 44, fracción IV y 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada, se impone a todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, se colige que el manual referido, expedido por el Pleno de la extinta Comisión Federal de la materia, mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2013, al establecer la posibilidad de que determinados concesionarios utilicen un formato simplificado para el cumplimiento de dicha obligación, no excede lo previsto por la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues dicho órgano no instituyó categorías de concesionarios, sino que únicamente implementó una forma de cumplimiento de la obligación, con mayor detalle para quienes consideró con más posibilidades de incurrir en prácticas contrarias a la competencia, y de menor complejidad para aquellos que, por su tamaño o tipo de operaciones, estimó que no representan riesgo en ese sentido.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.39 A (10a.)

Amparo en revisión 36/2014. Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. y otras. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: María Luisa Cervantes Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, AL DIVIDIR LA CONTABILIDAD EN MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (LEGISLACIÓN ABROGADA). El artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada dispone que "los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que para tal efecto establezca la secretaría, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones". Por su parte, el Acuerdo P/141112/637, que contiene la Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones expide el Manual que provee los criterios y metodología de separación contable por servicio, aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2013, establece que los servicios deberán separarse de la siguiente manera: II.1. Nivel minorista, II.1.1. Telefonía fija, II.1.2. Telefonía móvil y II.1.3. Televisión restringida y II.2. Nivel mayorista, II.2.1. Telefonía fija, II.2.2. Telefonía móvil y II.2.3. Televisión restringida. En consecuencia, al dividir el manual la contabilidad en mercados mayoristas y minoristas, no viola el principio de reserva de ley, pues éstos simplemente se establecen como niveles de los servicios por los que se exige la contabilidad separada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.41 A (10a.)

Amparo en revisión 36/2014. Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. y otras. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: María Luisa Cervantes Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA). La regulación asimétrica es uno de los medios a través de los cuales el Estado garantiza el derecho a la libre concurrencia y competencia, para establecer límites a los agentes preponderantes o con

poder sustancial en mercados altamente concentrados y con estructuras de monopolio, a fin de reducir barreras –tanto de acceso como de competencia– y generar esquemas para que concurran y compitan otros agentes. En concordancia con lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada, en la fracción XI de su artículo 9-A, faculta al órgano especializado en la materia para imponer obligaciones específicas a las entidades con poder sustancial en el mercado relevante. Sin embargo, el hecho de que en el manual referido, expedido por el Pleno de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2013, se haya establecido una misma metodología para todos los operadores, no viola el principio de regulación asimétrica descrito, ya que de conformidad con los artículos 44, fracción IV y 68 de la ley citada, la obligación de presentar la información de la separación contable por servicio se impone a todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Además, al emitir dicho manual, el órgano mencionado no actuó en uso de la atribución señalada, sino que lo hizo para establecer la forma de cumplimiento de una carga legalmente impuesta a todo el universo de concesionarios en la materia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.38 A (10a.)

Amparo en revisión 36/2014. Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. y otras. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: María Luisa Cervantes Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA NO ESTABA OBLIGADA A ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, CON BASE EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD QUE LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS UTILIZAN HABITUALMENTE PARA EFECTOS DISTINTOS. Los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de información financiera son bases consuetudinarias de una técnica, como es la contabilidad, pero ni los unos ni las otras son obligatorios per se, pues su aplicación deriva del hecho de que algunas legislaciones los recogen, como ocurre en los campos del derecho fiscal y comercial, en los que se utilizan para normar obligaciones específicas. En consecuencia, la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones no estaba obligada a establecer la

metodología de separación contable por servicio prevista en los artículos 44, fracción IV y 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada, con base en ese tipo de técnicas, sino que tenía libertad para determinar cuál era, bajo su criterio, el método de mayor pertinencia para obtener la información requerida en el sector, en relación con aspectos de competencia económica, máxime que al suscribir los títulos de concesión de redes públicas, los agentes económicos se obligaron en los términos en ellos pactados, y debían cumplir con las cargas inherentes a aquéllos, por lo que no es dable que pretendan su inaplicación, bajo el argumento de que la metodología es incongruente con los sistemas de contabilidad que utilizan habitualmente para efectos distintos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.40 A (10a.)

Amparo en revisión 36/2014. Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. y otras. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: María Luisa Cervantes Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA SATELITAL Y TERRENAL TIENEN LA CALIDAD DE TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE CONTROVIERTAN LOS LINEAMIENTOS DE *MUST CARRY* Y *MUST OFFER*. Los artículos octavo transitorio, fracción I, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y 2 de los lineamientos generales en relación con dichos artículo y fracción, emitidos por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2014, imponen la obligación y el derecho a los concesionarios que presten servicios de televisión restringida, sin hacer distingo entre los de televisión satelital y terrenal, de retransmitir las señales radiodifundidas de cualquier concesionario de televisión. Por tanto, ambos tienen la calidad de terceros interesados en los juicios de amparo en los que se controviertan dichos lineamientos (*must carry* y *must offer*).

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN

Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.51 A (10a.)

Queja 108/2014. TV Azteca, S.A. de C.V. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. NATURALEZA DE LA SEPARACIÓN CONTABLE O CONTABILIDAD SEPARADA POR SERVICIO Y SU ALCANCE CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA. De conformidad con la Guía de Contabilidad Regulatoria, publicada en marzo de 2009 por la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación), así como con los postulados del denominado "Documento de referencia" (Servicios de telecomunicaciones) de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en su Estudio sobre políticas y regulación de Telecomunicaciones en México, la separación contable o contabilidad separada por servicio es una medida de regulación asimétrica ex ante, que busca impedir a las entidades con poder significativo en el mercado llevar a cabo subsidios cruzados. No obstante, en nuestro sistema jurídico esta medida quedó establecida en la Ley Federal de Telecomunicaciones abrogada, no sólo para los agentes que ejercieran una posición dominante en ese mercado, sino que se consideró pertinente aplicarla a todos los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Lo anterior, pues aun cuando dicha medida se concibió por los organismos internacionales como parte de las regulaciones mínimas que los Estados deben asumir para establecer condiciones de competencia efectiva, nada impide que un país en particular, como México, vaya más allá de tal diseño de regulación, si es que lo considera necesario para las empresas que operan redes de telecomunicaciones y diversos servicios.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.37 A (10a.)

Amparo en revisión 36/2014. Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. y otras. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: María Luisa Cervantes Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TEORÍA DE LA ASUNCIÓN JUDICIAL. SUS POSTULADOS SE CUMPLEN CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL REPARA LA TRANSGRESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE OCASIONÓ ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL Y CON ELLO EVITA UNA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN EL PLANO INTERNACIONAL. Si un Tribunal Colegiado de Circuito concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la víctima del delito, esa decisión judicial evita una probable responsabilidad del Estado Mexicano en el plano internacional y, por tanto, la consecuencia lógica y necesaria es sancionar al servidor público que cometió un ejercicio indebido, o un descuido –en su caso– de la función jurisdiccional que ejercía como juzgador autorizado por el Consejo del Poder Judicial del Estado porque, contrariando a la Teoría de la Asunción Judicial, ese titular del órgano jurisdiccional ordinario no otorgó la tutela que de él se esperaba para reparar la violación alegada, convirtiéndose en el origen inmediato directo de esa violación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.A.T.19 K (10a.)

Amparo en revisión 126/2013. Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo. 13 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Sahuer Hernández. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa al amparo en revisión 126/2013, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2546.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA. Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio, respecto del cual se ostenta tercero extraño y que sean de fecha posterior a aquella en que tuvo conocimiento de esa sentencia, por haber promovido incidente de oposición a la ejecución, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo indirecto no debe computarse a partir de la emisión de cada acto tendente a lograr dicha ejecución, sino a partir de que el quejoso tuvo

conocimiento de la sentencia, porque en su calidad de tercero extraño a juicio, el derecho a ejercer la acción de amparo surge a partir de ese momento y no se regenera por cada acto posterior que se dicte en la etapa de ejecución, ya que no son actos autónomos, sino sólo una consecuencia directa e inmediata de la primera orden de ejecución, y los terceros extraños, por regla general, solamente tienen una oportunidad para promover amparo y defender sus derechos que son materia de un juicio en el que no son parte, ya que el plazo para promover el amparo inicia a partir de que tienen conocimiento del acto de autoridad que les causa perjuicio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.84 K (10a.)

Amparo en revisión 50/2014. Sergio de Pablo Navarro. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMAN-

DADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).", en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.74 K (10a.)

Queja 102/2014. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso número F/169852, únicamente en representación del patrimonio "A" de dicho fideicomiso. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Nota: La tesis 2a./J. 67/2009 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 265.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.

Si bien es cierto que bajo un esquema tradicional, al abordarse para su estudio, en los juicios del orden penal, el tema de la posible utilización de la tortura o los malos tratos, habitualmente, se ha enfocado únicamente a la aplicación o no en el sujeto activo del delito, ya sea como asegurado o detenido y/o retenido, en sus diversas fases de inculpado, imputado, procesado, acusado o incluso, sentenciado o ejecutoriado, no menos lo es que, del contenido de los artículos 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 5, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 2 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; así como 20, apartado B, fracción II, 22 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o. y 7o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 206 bis del Código Penal y 255, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Distrito Federal, puede interpretarse, sistemáticamente, que tales prácticas indebidas pueden llevarse a cabo no sólo contra los sujetos activos, bajo los matices apuntados, sino también respecto de otras personas que hayan intervenido en alguna fase procedimental (ver-

bigracia en su calidad de testigos u ofendidos) de los que, esencialmente, se pudiera obtener información con un propósito determinado, a saber, imputar al quejoso su intervención en la comisión de un delito; y, por ende, por similar razón, también puede dar lugar a que las autoridades, bajo la tutela y protección apuntadas, intervengan oficiosa e inmediatamente para realizar una investigación sobre el caso, en términos de los dispositivos 1o. y 22 de la Constitución, en relación con los artículos 1, numeral 1 y 5, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y, 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; esto es, además de dar vista al agente del Ministerio Público para la investigación ministerial respectiva, ordenar la práctica de exámenes especiales (psicológicos y médicos pertinentes), mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, o de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura que se alegue, a fin de establecer, a partir de su resultado, si la tortura y/o tratos crueles que refiera el testigo de cargo u ofendido haya sido objeto, se pudieran considerar como una violación de derechos fundamentales no sólo de éste, sino también del imputado, que generase diferentes afectaciones dentro del debido proceso, como la propia eficacia de las pruebas obtenidas en función del alegato de tortura. En consecuencia, la omisión de indagar la tortura alegada respecto de los intervinientes indicados y cuyo ateste se haya considerado contra el justiciable, constituye una violación a las leyes del procedimiento en el juicio de origen, que afecta a las defensas del quejoso, en términos del numeral 173, fracciones VIII y XXII, de la Ley de Amparo y, por ende, amerita su reposición.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P.32 P (10a.)

Amparo directo 385/2014. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretario: Víctor Manuel Ramírez Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESPONDE ACREDITARLA A ÉSTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 67/2010). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2010, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 843, de rubro: "TRABAJA-

DORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO Y NO DE UN CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO.", estableció que antes de dictar resolución, el juzgador debe examinar la naturaleza de las funciones atribuidas, al estar precisado en los artículos 6o., 15, fracciones II y III, 46, fracción II, 63, 64 y 65 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en qué supuestos se dará cada uno de los nombramientos, por lo que la denominación que se le atribuya no será determinante para establecer cuáles son los derechos que asisten a un trabajador al servicio del Estado, pues debe atenderse a la situación real en que se ubique respecto del periodo que haya permanecido en un puesto; a la existencia o no de un titular de la plaza para la que se le haya nombrado, así como a la naturaleza de ésta, ya sea permanente o temporal. Asimismo, en la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia, se señaló que, tratándose de trabajadores de base, el demandado deberá justificar los supuestos de la ley respecto de su temporalidad. Bajo este contexto, no debe considerarse que la vigencia de un contrato ha concluido sólo porque existe una cláusula que así lo señale, sino que es necesario que el demandado acredite objetivamente que la naturaleza de dicha relación es temporal. Por tanto, si la dependencia alega que el contrato de prestación de servicios profesionales tiene término de vigencia, no bastará ese señalamiento para determinar su temporalidad, sino que deberá analizarse si aquélla cumplió con su obligación de acreditar dicha naturaleza temporal, ya que, de no hacerlo, deberá estimarse que la relación es por tiempo indefinido. Estimar lo contrario dejaría en estado de indefensión a los trabajadores, al hacer depender el respeto a sus derechos de un señalamiento unilateral formulado por el empleador, aun cuando no corresponda a la situación de la actividad que realiza.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.3o.T.28 L (10a.)

Amparo directo 313/2014. María de los Ángeles Vargas Aramburo y otras. 7 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVARSE CUANDO EL ACTOR RECLAMA EL RECONOCIMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE Y LA EXCEPCIÓN DEL

DEMANDADO SE SUSTENTA EN QUE LA RELACIÓN FUE DE CARÁCTER CIVIL. Conforme a las jurisprudencias 2a./J. 20/2005, P./J. 36/2006 y 2a./J. 67/2010, publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 315; Tomo XXIII, febrero de 2006, página 10; y, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 843, de rubros: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.", "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL." y "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO Y NO DE UN CONTRATO DE NATURALEZA CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO IMPLICA NECESARIAMENTE EL OTORGAMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE O POR TIEMPO INDEFINIDO.", cuando el actor reclame el reconocimiento de un nombramiento de base y el demandado se excepcione aduciendo que la relación entre ambos es de carácter civil, la autoridad laboral deberá analizar: 1. Si el vínculo es de naturaleza laboral o civil y, en este sentido, si el prestador del servicio profesional desempeña labores con elementos propios, de manera independiente, contando con libertad para realizar su función tanto en su aspecto de temporalidad como en el profesional, sin sujeción a condiciones de horario, salario u otras; por el contrario, la relación laboral tiene como característica principal la subordinación jerarquíca durante la jornada de trabajo, existe continuidad en la prestación del servicio y el trabajo se realiza en el lugar y conforme al horario asignado, a cambio de una remuneración económica. 2. Hecho lo anterior, si la relación resulta ser de naturaleza laboral, deberá determinar si es de base o de confianza, para lo cual analizará la naturaleza de las funciones desempeñadas y los cargos que la ley de la materia considera de confianza. En caso de concluir que es de dicha naturaleza, una vez vencido el plazo previamente pactado, el trabajador no tendrá derecho a obtener nombramiento alguno. 3. Si considera que se trata de un trabajador de base, deberá atender a la situación real en que se encontraba, esto es, a la existencia o no de un titular de la plaza en la que se le haya nombrado, independientemente de la denominación del nombramiento respectivo, ya que de ello dependerá que el patrón pueda removerlo libremente sin responsabilidad alguna, y a la temporalidad del contrato, ya sea: a) definitivo; b) interino; c) provisional; d) por tiempo fijo; y, e) por obra determinada, partiendo del supuesto de que el demandado tiene la carga de acreditar la temporalidad, si en ella sustenta su

defensa; consecuentemente, al ser estos lineamientos necesarios para resolver, si la autoridad no los acata, el laudo será ilegal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.T.27 L (10a.)

Amparo directo 313/2014. María de los Ángeles Vargas Aramburo y otras. 7 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretaria: Alma Ruby Villarreal Reyes.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN CUYAS FUNCIONES SEAN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, DEBEN SER CONSIDERADOS CON AQUEL CARÁCTER. De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto en el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que, entre otros trabajadores, deben ser considerados de confianza no sólo los empleados que realicen funciones de inspección, vigilancia y fiscalización a nivel jefatura y subjefatura (siempre que estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate), sino también aquellos de la Secretaría de Gobernación adscritos al Área de Información y Análisis de Radio y Televisión de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, cuyas funciones, entre otras, son las de monitorear el contenido de los programas de televisión las veinticuatro horas del día con material grabado, reportar incidencias en concursos y sorteos, aparición del interventor; reporte de incidencias de comerciales con contenido sexual, bebidas alcohólicas y de cigarros; así como su horario de transmisión; y, elaborar reporte de incidencias que se susciten durante los procesos electorales, pues dichas actividades encuadran en los supuestos legales de inspección y vigilancia a que hace referencia el precitado numeral.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.T.127 L (10a.)

Amparo directo 1213/2014. Secretaría de Gobernación. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. DE LOS HECHOS NARRADOS EN SU DEMANDA PUEDE DERIVARSE LA PRESUNCIÓN DE QUE SU TRABAJO ES POR OBRA DETERMINADA. De conformidad con el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, los laudos deben dictarse a verdad sabida y buena fe guardada; por ello, si del análisis de la demanda se advierte que el trabajador dijo que se le contrató para realizar labores de construcción (albañilería, plomería o pintura, entre otros) surge la presunción de que este tipo de trabajo, por su naturaleza, es por obra determinada, en términos del artículo 36 de la citada ley; sin embargo, conforme a la particularidad de cada caso, esta presunción es susceptible de desvirtuarse o robustecerse de acuerdo a las actuaciones o constancias existentes en el juicio, incluso, de la propia narración de los hechos de la demanda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO

VI.1o.T.5 L (10a.)

Amparo directo 446/2014. Álvaro Fernández Vélez. 8 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria García Reyes. Secretario: Enrique Antonio Pedraza Mayoral.

Amparo directo 582/2014. Antonio Ramírez Flores y otros. 12 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Contreras Carazo, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Lydia Obdulia Castillo Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

U

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Lo dispuesto por el artículo 57, inciso b), del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, al referir que los profesores e investigadores de carrera tendrán, además de los consignados en los artículos 6o. y 55 de ese estatuto, entre otros derechos, desempeñar en otras instituciones, previa autorización del consejo técnico respectivo, cátedras u otras labores remuneradas, siempre que el tiempo que dedique a éstas, sumado al que deba dedicar a la universidad, no exceda de 48 horas semanarias, no resulta violatorio de los artículos 3o. y 5o. constitucionales, ya que categóricamente reconoce a los académicos, su derecho al trabajo; a desempeñarse incluso como catedráticos o en otras labores remuneradas en diversas instituciones académicas a la universidad nacional; y, si bien establece que para ello se requiere, por una parte, la autorización previa del consejo técnico respectivo, y que el tiempo que se empleara al servicio de la diferente institución académica, sumado al dedicado a la universidad nacional, no exceda de cuarenta y ocho horas semanales; ello obedece a la necesidad de regular los aspectos que deben satisfacer los profesores que presten sus servicios en materia educativa, a fin de que los trabajadores académicos que presten sus servicios a la Universidad Nacional Autónoma de México no rebasen la jornada legal, con el tiempo dedicado en otra institución, toda vez que el objeto que se persigue es que dichos trabajadores conserven la buena calidad en el servicio que prestan, lo cual redunda en beneficio de los propios académicos, pues el tiempo que presten sus servicios no se torna excesivo; de ahí que de ninguna forma se limitan o impiden sus garantías de libertad de trabajo; de aplicación del conocimiento científico; libertad de cátedra; de investigación; de libre examen y discusión de las ideas; ni el desarrollo científico o cultural, como tampoco el dedicarse libremente a la profesión, industria o trabajo que mejor le acomode.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.T.129 L (10a.)

Amparo directo 1407/2014. Jorge López Blanco. 5 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

V

VIOLACIONES DE FONDO. AUNQUE ÉSTAS RESULTARAN FUNDADAS Y GENERARAN UN MAYOR BENEFICIO, CUANDO LA RESPONSABLE INCURRA EN UNA VIOLACIÓN FORMAL AL NO ESTUDIAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL DEMANDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, A FIN DE DEPURAR LOS TEMAS QUE DEBAN QUEDAR FIRMES Y LOGRAR UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL EVITAR UNA MULTIPLICIDAD DE AMPAROS, DEBE OCUPARSE DEL ANÁLISIS DE AMBAS INFRACCIONES. El artículo 189 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo, por encima de los procesales y los de forma. De ahí que, cuando la autoridad responsable omite el estudio de las excepciones opuestas por el demandado, incurre en una violación formal que, por sí misma, no lleva a conceder el amparo solicitado si existen violaciones de fondo que de resultar fundadas generan mayor beneficio al quejoso; por lo cual, el Tribunal Colegiado de Circuito debe ocuparse del análisis de ambas infracciones, a fin de depurar los temas que deban quedar firmes y, con ello, lograr una pronta administración de justicia, al evitar la multiplicidad de amparos por cuestiones que pudieron atenderse desde el primer juicio de amparo analizado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.78 K (10a.)

Amparo directo 338/2014. Alejandro Ramírez Guerrero. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Adolfo Almazán Lara.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE POR CUANTO VE A LA ACCIÓN PRINCI-

PAL LAS HACE VALER EN AMPARO DIRECTO, LA TRASCENDENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN DEBE ACOTARSE ÚNICAMENTE A LA PARTE DEL FALLO QUE NO LE RESULTÓ BENÉFICO. El artículo 182 de la Ley de Amparo establece, entre otras hipótesis, que el amparo adhesivo podrá promoverlo quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria para que, ante el juicio de amparo promovido por su contraparte, haga valer todas las violaciones procesales que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. De manera que, si alguna parte del acto reclamado ocasiona un agravio personal y directo al adherente, entonces deberá impugnarla a través de un juicio de amparo directo principal y no adhiriéndose al que hubiese promovido su contraparte, lo que igualmente sucede con las violaciones al procedimiento, pues si éstas repercuten directamente en la parte del fallo que no fue favorable para el promovente, será a través del juicio de amparo directo que presente contra dicho fallo, en donde deberán hacerse valer. Así, cuando la parte que obtuvo sentencia favorable por cuanto ve a la acción principal, hace valer en amparo directo una violación procesal (en relación con una prueba que ofreció para acreditar los hechos contenidos en su escrito de demanda o contestación), la trascendencia de su actualización debe acotarse únicamente a la parte del fallo que no le resultó benéfica, por ser la que le agravia de manera personal y directa y, por ende, su impugnación procede a través del juicio de amparo directo principal, mas no debe comprender la repercusión que pudiera ocasionar en torno a la acción principal, porque en tal caso, ello debe plantearse en amparo directo adhesivo, conforme al aludido artículo 182.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN.

(IX Región)1o.5 K (10a.)

Amparo directo 861/2014 (expediente auxiliar 888/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Cano Maynez. Secretaria: Lorena Casillas Baca.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VIOLACIONES PROCESALES. ORDEN EN QUE DEBEN PLANTEARSE PARA SU ESTUDIO EN EL AMPARO DIRECTO. El juicio de amparo en la vía directa es el remedio constitucional idóneo para reclamar el derecho fundamental de debido proceso, porque el quejoso puede plantear las violaciones a las leyes del procedimiento que rige la actuación del Juez y de las partes, como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la

Constitución Federal y 171 de la Ley de Amparo. De ahí que procede plantear las violaciones procesales en el siguiente orden para su estudio: a) Por obviedad es necesario identificar la omisión o el acto positivo ocurrido dentro del juicio, esto es, debe constatarse su existencia. b) Determinar la existencia del recurso o medio de defensa ordinario procedente contra la resolución u omisión que constituye la materia de la violación al procedimiento. c) Determinar si se realizó la impugnación mediante el recurso o medio de defensa ordinario. d) Si el medio de defensa o recurso ordinario es desechado también debe impugnarse a través del recurso ordinario procedente. e) Cuando existe una resolución firme que desechó el recurso o medio de defensa ordinario, los conceptos de violación deben estar dirigidos a demostrar la ilegalidad del desechamiento, porque de ser fundados, se removerá ese obstáculo para que, en su caso, la autoridad responsable resuelva el fondo de los agravios que haya causado la resolución que motivó la impugnación. f) Cuando el medio de defensa o recurso ordinario se agotó cabalmente y se resolvió sobre los agravios; los conceptos de violación deben impugnar las consideraciones que dieron respuesta a los agravios. g) Debe constatarse que la resolución calificada como violación procesal trascienda al resultado del fallo. h) Satisfechos los requisitos previos de la impugnación con el recurso o medio ordinario de defensa, es necesario estudiar el fondo y con base en los conceptos de violación, ha de determinarse si la norma procesal fue debidamente aplicada, si debió aplicarse otra norma o si se apreciaron debidamente los hechos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.83 K (10a.)

Amparo directo 328/2014. Rosa María Castañeda Bautista. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Ariadna Ivette Chávez Romero.

Amparo directo 341/2014. Juan Manuel Arce Flores. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Valery Palma Campos.

Amparo directo 574/2014. Jesús Horacio Falcón Rodríguez. 13 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Montserrat C. Camberos Funes.

Amparo directo 534/2014. V Y A Logística y Servicios Integrales, S.A. de C.V. 6 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Montserrat C. Camberos Funes.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

VIOLENCIA FAMILIAR. AL ELEMENTO NORMATIVO DE ESTE DELITO, RELACIONADO CON LA REFERENCIA ESPACIAL, CONSISTENTE

EN QUE LA CONDUCTA SE DESPLIEGUE "DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO O LUGAR QUE HABITE" DEBE DÁRSELE UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la exposición de motivos de la reforma del artículo 200 del Código Penal para el Distrito Federal, que establece el delito de violencia familiar, de dieciocho de marzo de dos mil once, se advierte que aquélla recoge los compromisos asumidos por el Estado Mexicano al adherirse a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida como "Convención de Belém do Pará". Por ello, al elemento normativo de este ilícito, relacionado con la referencia espacial, consistente en que la conducta se despliegue "dentro o fuera del domicilio o lugar que habite", debe dársele una interpretación extensiva en el sentido de que se lleve a cabo dentro o fuera del domicilio de la víctima, pues lo que la reforma mencionada pretendió fue ampliar el margen espacial donde se comete el delito, toda vez que la violencia puede cometerse en la casa o en el lugar donde se habite, como fuera del domicilio; lo anterior, con el objeto de que, en el caso, no queden impunes violaciones graves contra las mujeres.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.79 P (10a.)

Amparo directo 457/2014. 19 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María Imelda Ayala Miranda.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DEBE IDENTIFICARSE ANTES DE ENTRAR AL DOMICILIO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE ÉSTE. El derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite la práctica de visitas domiciliarias, siempre y cuando se ajusten a los lineamientos previstos en dicho precepto y en los ordenamientos legales, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. III/2007. Ahora bien, entre dicha prerrogativa y el ejercicio de las facultades de comprobación en materia fiscal a través de una visita domiciliaria, debe existir un equilibrio, ya que no puede concebirse una revisión de esa naturaleza que no cumpla con el derecho humano mencionado, toda vez que esa atribución de la autoridad tiene dos momentos: 1) Cuando el visitador acude al domicilio a solicitar la entrada para realizar la visita, caso en el cual deberá identificarse ante quien le permita la entrada, para que éste tenga la certeza de que se trata de un funcionario

autorizado para esos efectos; aspecto regulado por el artículo 16 citado y, 2) Una vez identificado y dentro del domicilio, en uso de las facultades contenidas en el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, procederá al inicio y desarrollo de la visita. Así, la entrada al domicilio y la realización de la visita constituyen momentos distintos, el primero que, al consistir en la intromisión a aquél, con abstracción de su finalidad, requiere que se salvaguarde el derecho humano a su inviolabilidad y, por tanto, obliga al funcionario a identificarse ante quien le da el acceso y, el segundo, que se efectúa dentro del domicilio. Con base en lo anterior, el habitante del domicilio tiene derecho a exigir que los visitadores adscritos a cualquier autoridad hacendaria se identifiquen previo a ingresar y que soliciten la presencia del interesado o de su representante legal, independientemente de que en términos de la fracción III del artículo 44 mencionado lo realicen nuevamente al inicio propiamente de la visita y ante la persona con quien se entienda la diligencia, la cual no necesariamente es la que les permite el acceso al domicilio.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.3o.A.195 A (10a.)

Amparo directo 324/2014. Comercializadora de Lubricantes Industriales de Importación, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Leticia Flores Díaz. Secretario: Enrique Orozco Moles.

Nota: La tesis aislada 2a. III/2007 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, enero de 2007, página 823, con el rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA (VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004)."

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEXTA PARTE
NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES

SECCIÓN PRIMERA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

ACUERDO GENERAL NÚMERO 7/2015, DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE; Y SE ORDENA A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EL ENVÍO DIRECTO DE DICHOS ASUNTOS A ESTE ALTO TRIBUNAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El artículo 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad para expedir acuerdos generales a fin de remitir

a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiere establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Suprema Corte determine para una mejor impartición de justicia;

SEGUNDO. En términos de lo establecido en los artículos 11, fracciones VI y XXI, y 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Pleno puede, a través de acuerdos generales, remitir los asuntos de su competencia para su resolución a los Tribunales Colegiados de Circuito; y, en ese supuesto, éstos serán competentes para resolverlos;

TERCERO. El trece de mayo de dos mil trece el Tribunal Pleno emitió el Acuerdo General 5/2013, modificado por última vez mediante Instrumento Normativo del nueve de septiembre del mismo año, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito;

CUARTO. Conforme a lo dispuesto en el punto primero del Acuerdo General Plenario 11/2010, de diecisiete de agosto de dos mil diez, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada celebrada el veinte de abril de dos mil quince, acordó:

1. Los amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece, serán resueltos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

2. Atendiendo al decanato, designar al Ministro Eduardo Medina Mora I. como encargado de supervisar y aprobar la elaboración de los proyectos respectivos, y

3. La creación de la Comisión 71 integrada por Secretarios de Estudio y Cuenta, para analizar los temas de constitucionalidad que correspondan;

QUINTO. Al catorce de abril de dos mil quince se encuentran radicados en este Alto Tribunal, los amparos en revisión 51/2015, 174/2015, 181/2015, 302/2015, 303/2015, 353/2015, 354/2015 y 361/2015, en los que se plantea la inconstitucionalidad del artículo 69-B señalado en el considerando cuarto que antecede;

SEXTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede aplazar mediante acuerdos generales la resolución de juicios de amparo pendientes de resolver, por lo que resulta aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo señalado en el párrafo segundo de su artículo 2o., lo previsto en el diverso 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto a la atribución para decretar la suspensión del proceso cuando la decisión no pueda pronunciarse hasta que se dicte resolución en otro negocio, supuesto que se actualiza cuando existen juicios de amparo pendientes de resolver en los tribunales del Poder Judicial de la Federación en los que se plantean cuestiones que serán definidas por aquél; máxime, si se trata de asuntos de la competencia originaria de este Alto Tribunal que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden resolver en ejercicio de competencia delegada, y

SÉPTIMO. Con el fin de preservar el derecho a la seguridad jurídica de los gobernados establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, considerando además que la institución del aplazamiento o suspensión del dictado de la resolución está prevista en el artículo 366 antes invocado, por aplicación supletoria de éste, se estima conveniente acordar el aplazamiento de los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el problema de constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece.

Por tanto, por economía procesal, en obvio de trámites y para mayor celeridad, los recursos de revisión interpuestos o que se interpongan contra sentencias dictadas en amparo indirecto en los que subsista el problema de constitucionalidad del artículo 69-B de referencia, deberán remitirse directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de que la Comisión 71 de Secretarios de Estudio y Cuenta seleccione el número de asuntos suficientes para el análisis requerido.

En consecuencia, con fundamento en lo antes mencionado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. En tanto la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve los amparos en revisión referidos en el considerando

quinto del presente acuerdo general, establece el o los criterios respectivos y se emite el acuerdo general plenario que corresponda, en los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito en los que subsista el problema de constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta.

SEGUNDO. Los Juzgados de Distrito enviarán directamente a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los amparos en revisión señalados en el punto primero que antecede, derivados de los juicios de amparo en los que se haya dictado o se dicte la sentencia correspondiente.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. Este acuerdo general entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo general en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en medios electrónicos de consulta pública; y hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal y, para su cumplimiento, de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados de Circuito.

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

El licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA:

Este ACUERDO GENERAL NÚMERO 7/2015, DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE DISPONE EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE; Y SE ORDENA A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EL ENVÍO DIRECTO DE DICHOS ASUNTOS A ESTE ALTO TRIBUNAL, fue emitido por el Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el día de hoy, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Presidente Luis María Aguilar Morales. El señor Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente, previo aviso.—México, Distrito Federal, a veinte de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 29 DE ABRIL DE 2015).

Nota: Los Acuerdos Generales Números 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito y 11/2010, de diecisiete de agosto de dos mil diez, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula el sistema de comisiones de Secretarios de Estudio y Cuenta creadas por el Pleno de este Alto Tribunal citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, página 2173 y Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 2471, respectivamente.

SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ACUERDO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE LA DISTINCIÓN AL MÉRITO JUDICIAL "IGNACIO L. VALLARTA", CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL TRECE.

CONSIDERANDO

PRIMERO. El tres de octubre de dos mil seis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales;

SEGUNDO. Ese ordenamiento normativo establece, en su título décimo primero, capítulo I, entre otros estímulos para el personal jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, la Distinción al Mérito Judicial "Ignacio L. Vallarta", que se entregará anualmente a un Juez de Distrito, a un Magistrado de Circuito de Tribunal Unitario y a un Magistrado de Circuito de Tribunal Colegiado, en reconocimiento a sus méritos en la carrera judicial;

TERCERO. Los artículos 139 a 143 del mismo acuerdo general, establecen el procedimiento a seguir para otorgar la referida distinción;

CUARTO. El dispositivo 143 en mención, establece que si el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo estima conveniente, podrá abstenerse de otorgar ese estímulo en una o varias categorías de las señaladas en el considerando SEGUNDO; igualmente, podrá conferir, si así lo considera, más de un reconocimiento en una sola de ellas;

QUINTO. Conforme a lo indicado en los artículos 140 y 141 del acuerdo general en cita, la Comisión de Carrera Judicial analizó el historial de diversos juzgadores federales, para seleccionar a los candidatos que reunieran los requisitos para ser acreedores de la Distinción al Mérito Judicial "Ignacio L. Vallarta". Efectuado el estudio y ponderación correspondientes, sometió a consideración del Pleno la propuesta de los servidores públicos que estimó reunían los requisitos para ser recipiendarios de esa distinción correspondiente al año dos mil trece;

SEXTO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el once de febrero de dos mil quince, por unanimidad de siete votos, determinó otorgar la Distinción al Mérito Judicial "Ignacio L. Vallarta" correspondiente al año dos mil trece, en la categoría de Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito, al Magistrado David Delgadillo Guerrero, quien cumple con los requisitos exigidos por el artículo 140 del citado acuerdo general, en virtud de que su actuación en la tarea jurisdiccional es apegada al principio de excelencia, y ha sido sobresaliente, honorable y acorde con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Por cuanto hace a las categorías de Magistrado de Tribunal Unitario de Circuito y de Juez de Distrito, el propio Pleno estimó conveniente abstenerse de otorgarla en esta ocasión;

SÉPTIMO. El Magistrado David Delgadillo Guerrero nació el 24 de enero de 1941 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

Su alma máter es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución en la que estudió la carrera de licenciado en derecho de 1962 a 1966, titulándose el 19 de diciembre de 1969 con la tesis "La Reserva de Dominio en la Compraventa".

La vocación por la enseñanza de la ciencia jurídica, lo encaminó a la cátedra en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales campus Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México; así como en la Escuela Cristóbal Colón en el Estado de Veracruz, en beneficio de nuevas generaciones de estudiosos del derecho.

En el camino de la judicatura federal, ha sabido crear su propio *cursus honorum*, con gran esfuerzo, dedicación, independencia e imparcialidad, rasgos significativos de la potestad pública de impartir justicia, para alcanzar el perfil de juzgador independiente, objetivo, imparcial, profesional y de excelencia.

Bajo esa concepción ha transitado por la carrera judicial, entendida como un sistema programado de ascensos, no sólo en razón de la antigüedad, sino

básicamente en función de la idoneidad del juzgador federal, ocupando los cargos de actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del uno de julio de mil novecientos setenta, al treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y uno; secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, del uno de agosto de mil novecientos setenta y uno, al treinta de noviembre de mil novecientos setenta y dos; secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del uno de diciembre de mil novecientos setenta y dos, al treinta de abril de mil novecientos setenta y cinco; y, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del uno de mayo de mil novecientos setenta y cinco, al treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y ocho.

En ese currículum de vida judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y ocho, a propuesta del mismo Alto Tribunal, lo designó Juez de Distrito, por unanimidad de dieciocho votos.

Esa elevada misión judicial, la desempeñó con gran ahínco y responsabilidad como Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad del mismo nombre, del uno de febrero de mil novecientos setenta y ocho, al quince de febrero de mil novecientos ochenta; y, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, del dieciséis de febrero de mil novecientos ochenta, al treinta de junio de mil novecientos ochenta y cuatro.

Posteriormente, en reconocimiento a su profesionalismo, capacidad y vocación judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintisiete de julio de mil novecientos ochenta y dos, por unanimidad de dieciocho votos lo reeligió en el cargo de Juez de Distrito, con efecto a partir del uno de agosto del año antes mencionado.

La suma de sus esfuerzos cotidianos y el cabal cumplimiento de su función como Juez de Distrito, fueron razones esenciales para que el Pleno del Máximo Tribunal, en sesión de veintitrés de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, a propuesta de la Segunda y Tercera Salas, lo designara Magistrado de Circuito, por unanimidad de veinte votos.

Como titular de la magistratura con que fue investido, integró el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, con sede en Veracruz, del uno de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, al treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y siete; el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del uno de agosto de mil novecientos ochenta y

siete, al quince de noviembre de mil novecientos noventa y siete; el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, al quince de junio de dos mil cuatro; y, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del dieciséis de junio de dos mil cuatro a la fecha.

A esos encargos jurisdiccionales, sumó el de Presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito durante el año dos mil trece.

Esa es la trayectoria judicial que el Magistrado David Delgadillo Guerrero ha construido palmo a palmo durante cuarenta y cuatro años, treinta de los cuales cumplió como Magistrado de Circuito, con buena reputación, sin que en todo ese tiempo haya sido sancionado ni una sola vez con motivo de un procedimiento administrativo disciplinario.

Sabedor de la responsabilidad, ética e imparcialidad que la sociedad demanda de los juzgadores, ha demostrado su alto compromiso con la impartición de justicia, conduciéndose con rectitud en las categorías judiciales que ha desempeñado, por lo que se concluye que su actuar ha sido honorable y respetuoso, tanto con sus pares como con sus subordinados y los justiciables; que en todo momento ha cumplido de manera destacada con el imperativo de la función pública que tiene encomendada; y, que se hace merecedor de recibir la Distinción al Mérito Judicial "Ignacio L. Vallarta", jurista de nuestra historia nacional que vivió entre 1830 y 1893, y personaje emblemático en la defensa de la independencia del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, toda vez que la actuación del Magistrado de Circuito David Delgadillo Guerrero en la tarea jurisdiccional es apegada al principio de excelencia, acorde con el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en los preceptos legales invocados, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

ÚNICO. Como un reconocimiento a su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, se otorga al Magistrado David Delgadillo Guerrero, la Distinción al Mérito Judicial "Ignacio L. Vallarta", correspondiente al año dos mil trece.

TRANSITORIO

ÚNICO. Cúmplase y publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al otorgamiento de la Distinción al Mérito Judicial "Ignacio L. Vallarta", correspondiente al año dos mil trece, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de ocho de abril de dos mil quince, por unanimidad de votos de los consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 29 DE ABRIL DE 2015).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 2025.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ADICIONA EL SIMILAR QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judi-

catura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos administrativos internos.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 499 Bis al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, para quedar como sigue:

"**Artículo 499 Bis.** El Comité de Administración Inmobiliaria, a propuesta de la Coordinación de Administración Regional o de la Dirección General de Servicios Generales, podrá autorizar las erogaciones que sean necesarias para poder adquirir inmuebles por donación o comodato; y aquellas relacionadas con los inmuebles objeto de la negociación, que sean benéficas para los intereses del Poder Judicial de la Federación."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, fue aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de once de marzo de dos mil quince, por unanimidad de votos de los consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a catorce de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 23 DE ABRIL DE 2015).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2256.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA EL SIMILAR QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de confor-

midad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos administrativos internos.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 93; 95, fracción I; 96; 97, fracciones I y II; y 98; se adicionan las fracciones III y IV al artículo 97; y se deroga el artículo 94; y las fracciones II y III del artículo 95 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue:

"**Artículo 93.** Los coordinadores técnicos administrativos estarán adscritos a los órganos jurisdiccionales a que estén asignados, son personal de confianza y, por ende, de libre designación y remoción.

Serán nombrados y removidos por el titular del órgano jurisdiccional al que esté adscrita la plaza.

Las personas designadas para ocupar la plaza de coordinador técnico administrativo, deberán cumplir previamente con los requisitos que establece el artículo 95 de este acuerdo.

Artículo 94. Derogado.

Artículo 95. …

I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en Derecho;

II. Derogada;

III. Derogada;

IV. a **V.** …

Artículo 96. El nombramiento inicial de los coordinadores técnicos administrativos será de seis meses, tiempo durante el cual deberán acreditar el curso de inducción que determine el Instituto de la Judicatura.

El nombramiento definitivo se expedirá a los coordinadores técnicos administrativos que acrediten el curso a que se refiere el párrafo anterior, para lo cual, el Instituto de la Judicatura comunicará al titular del órgano jurisdiccional respectivo, los resultados correspondientes.

En caso de que los coordinadores técnicos administrativos no acrediten el curso, concluirán su encargo al término de su nombramiento inicial.

Artículo 97. …

I. Brindará apoyo al órgano jurisdiccional en la operación y supervisión de sistemas administrativos, financieros e informáticos, así como en la gestión de recursos humanos, materiales y servicios generales;

II. Servirá de enlace entre el propio órgano jurisdiccional al que está adscrito y las áreas administrativas en la gestión y desahogo de trámites administrativos, estadísticos e informáticos;

III. Atenderá las instrucciones que le encomiende el titular del órgano jurisdiccional que se relacionen con actividades jurídico-administrativas del propio órgano; entre otras, visitas de inspección, control y manejo de archivo, SIBAP, y videoconferencias. En ese último caso deberán coordinarse con la Dirección General de Tecnologías de la Información; y

IV. Cumplirá con las funciones establecidas en los manuales, lineamientos, directrices o instrucciones que determine el Pleno o las Comisiones.

Artículo 98. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de supervisar y evaluar que los coordinadores técnicos administrativos cumplan con las funciones encomendadas en los manuales, lineamientos, directrices e instrucciones generales y particulares y demás disposiciones aplicables.

En caso de que el titular del órgano jurisdiccional detecte deficiencia en el desempeño del coordinador técnico administrativo, lo conminará al cumplimiento de las funciones encomendadas, con independencia de las responsabilidades a que haya lugar."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Las plazas de los coordinadores técnicos administrativos que a la entrada en vigor de este acuerdo estén adscritas a la Dirección General de Tecnologías de la Información se transfieren a cada uno de los órganos jurisdiccionales a que estén asignadas.

CUARTO. Los coordinadores técnicos administrativos que hayan sido designados antes de la entrada en vigor del presente acuerdo, continuarán en sus funciones cuando así lo determinen los titulares de los órganos jurisdiccionales correspondientes.

En caso de que se determine que un coordinador técnico administrativo no continúe en funciones, se le deberá notificar la conclusión de su nombramiento con dos meses de anticipación a la fecha de terminación, lapso en cual el titular del órgano jurisdiccional que corresponda designará al nuevo coordinador en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, quien entrará en funciones al vencimiento del referido plazo, siempre y cuando acredite el curso de inducción del Instituto de la Judicatura.

QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración llevará a cabo las acciones necesarias para la implementación del presente acuerdo.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fue

aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veinticinco de marzo de dos mil quince, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza y Manuel Ernesto Saloma Vera.—México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 24 DE ABRIL DE 2015).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la

Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos administrativos internos.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 944, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, para quedar como sigue:

"**Artículo 944.** …

"**I.** Tratándose de alimentos para los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, se autorizará su venta a personas ajenas a la institución sólo en los horarios que para la ingesta de alimentos indiquen los titulares de los mismos; y

"**II.** …"

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, fue aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión ordinaria de once de marzo de dos mil quince, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen

Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 24 DE ABRIL DE 2015).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2256.

ACUERDO GENERAL 15/2015, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DENOMINACIÓN, RESIDENCIA, COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO Y FECHA DE INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA; ASÍ COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE LA SEDE REFERIDA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones VI y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y límites territoriales de los Juzgados de Distrito, en cada uno de los circuitos

en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución esta última que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracciones II y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. Los ingresos de causas penales relevantes, procedentes de toda la República Mexicana, derivadas de la competencia extendida regulada en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, las cuales implican un alto grado de complejidad tanto en su trámite como en la elaboración de los proyectos de resolución, ha ocasionado un aumento en las cargas de trabajo que registran los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, lo que hace necesario establecer un nuevo órgano jurisdiccional en la referida entidad y residencia;

QUINTO. En atención a lo señalado en el considerando anterior, y a fin de dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión del 11 de junio de 2014, aprobó el dictamen de creación de un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; y

SEXTO. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, en la actualidad se cuenta con la infraestructura física indispensable para la instalación del citado órgano jurisdiccional, lo cual hace necesario determinar lo relativo a su denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y fecha de inicio de funciones.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El nuevo órgano jurisdiccional se denominará Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con

residencia en Toluca, y tendrá idéntica jurisdicción territorial y competencia a la de los Juzgados de Distrito homólogos, actualmente en funciones en la sede citada.

Su domicilio se ubicará en: Calle Doctor Nicolás San Juan número 104, 2do. piso, ala B, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca, Estado de México.

Artículo 2. El 1 de mayo de 2015, iniciará funciones el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con la plantilla autorizada para este órgano jurisdiccional.

Artículo 3. Los Juzgados de Distrito homólogos con residencia en Toluca, Estado de México, conservarán su actual denominación, competencia y jurisdicción territorial.

Artículo 4. A partir de la fecha señalada en el artículo 2 del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, prestará servicio al órgano jurisdiccional de nueva creación.

Artículo 5. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles, del 1 al 29 de mayo de 2015; así como los asuntos no urgentes que se reciban en días y horas inhábiles de ese periodo; se remitirán al Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos; con excepción de los asuntos relacionados en términos de las reglas previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en cuyo caso serán turnados al órgano respectivo que cuente con los antecedentes.

Transcurrido el plazo antes señalado, los asuntos nuevos que se presenten en días y horas hábiles e inhábiles se distribuirán entre los siete Juzgados de Distrito de procesos penales federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, conforme al sistema computarizado, aplicable para tales efectos, y en términos del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Al finalizar el periodo de exclusión de turno indicado y dentro de los cinco días hábiles siguientes, los titulares de los 7 órganos jurisdiccionales indi-

cados, deberán informar a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, y a la Dirección General de Estadística Judicial sobre la productividad obtenida.

El informe referido deberá contener los datos correspondientes a la existencia inicial, los ingresos y egresos, así como la existencia final, registrados durante el periodo de exclusión de turno.

Artículo 6. El rol de guardias en días y horas inhábiles para recibir asuntos urgentes, que actualmente tienen los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se modifica únicamente para incluir al nuevo órgano en cita, en los siguientes términos:

ORDEN DEL TURNO DE LA GUARDIA SEMANAL PARA RECIBIR ASUNTOS URGENTES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN TOLUCA.

SEMANA DE GUARDIA AÑO 2015	NÚMERO DE ÓRGANO JURISDICCIONAL AL QUE CORRESPONDE LA GUARDIA
Del 27 de abril al 3 de mayo (Es la misma guardia asignada en el rol original)	Juzgado Tercero
Del 4 al 10 de mayo	Juzgado Sexto
Del 11 al 17 de mayo (El rol de guardias se recorre a partir de la inclusión de este órgano)	Juzgado Séptimo
Del 18 al 24 de mayo	Juzgado Primero
Del 25 al 31 de mayo	Juzgado Cuarto
Del 1 al 7 de junio	Juzgado Segundo
Del 8 al 14 de junio	Juzgado Quinto
Del 15 al 21 de junio	Juzgado Tercero
Del 22 al 28 de junio	Juzgado Sexto
Del 29 de junio al 5 de julio	Juzgado Séptimo

Y así sucesivamente, conforme al rol establecido después de la inclusión del nuevo órgano.

El Juzgado de Distrito que se encuentre de guardia, deberá informar a la oficina de correspondencia común que le presta servicio sobre los asuntos recibidos durante la misma, a fin de que al reanudar sus labores realice la compensación respectiva, y se equilibren las cargas de trabajo.

Artículo 7. El titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con asistencia de un secretario, autorizará el uso de libros de gobierno nuevos, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

De igual forma, dicho titular deberá levantar por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones del órgano jurisdiccional respectivo, cuyo formato le será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos; y remitirá un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 8. El órgano jurisdiccional de nueva creación deberá remitir, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, su reporte estadístico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artículo 9. Se modifica el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno en sesión de 23 de enero de 2013, en el punto **SEGUNDO**, apartado **II. SEGUNDO CIRCUITO**, número **3**, para quedar como sigue:

"SEGUNDO.…

II. SEGUNDO CIRCUITO:…

1.…

2.…

3. Veintiséis Juzgados de Distrito en el Estado de México: siete de Procesos Penales Federales…"

Artículo 10. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; y de Administración del Consejo de la Judicatura Federal,

están facultados para interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de mayo de 2015.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación y para mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 15/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la sede referida, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de quince de abril de dos mil quince, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza y Manuel Ernesto Saloma Vera.—México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 30 DE ABRIL DE 2015).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y, 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; Libro 14, Tomo III, enero 2015, página 2127, y Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 16/2015, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7 Y 9, FRACCIONES I Y II, DEL DIVERSO ACUERDO GENERAL 48/2013, QUE CONSTITUYE EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA QUE IMPLEMENTA LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, y 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

TERCERO. Para cumplir a cabalidad la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal en el ámbito de la Justicia Federal, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 48/2013, que constituye el fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa esta reforma;

CUARTO. El Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal es presidido por el Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto por el artículo 7, párrafo primero, del Acuerdo General 48/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal.

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal preside los Plenos de ambos órganos del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con los artículos 14, fracciones II y III, y 85, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que le atribuyen la facultad de tramitar los asuntos competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como autorizar la lista de asuntos y dirigir los debates, se estima que debe homologarse con las atribuciones que debe desempeñar el Ministro Presidente al presidir el Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal para el cumplimiento de los objetivos de este fideicomiso.

En consecuencia, se considera necesario ajustar la normativa que establece y regula el funcionamiento del Comité Técnico del Fideicomiso, señalando facultades expresas del Ministro Presidente para el desarrollo más ágil de las sesiones del Comité, debido a que actualmente preside pero no convoca, y la finalidad es que quien preside debe conocer los asuntos que se someterán a consideración del cuerpo colegiado y convocar a éste.

Con fundamento en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.—Se reforman los artículos 7 y 9, fracciones I y II, del diverso Acuerdo General 48/2013, que constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, para quedar como sigue:

"**Artículo 7.** El Fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por los consejeros integrantes del Pleno y será presidido por el presidente del Consejo. El Presidente autorizará el orden del día de los asuntos listados, convocará a sesión ordinaria o extraordinaria y dirigirá los debates.

…

…

…

…

Artículo 9. El Comité Técnico designará a propuesta de su presidente al secretario, quien concurrirá a las sesiones del mismo con voz pero sin voto, en caso de ausencia, el Comité Técnico podrá designar un suplente en la sesión correspondiente.

El secretario tendrá las funciones siguientes:

I. Elaborar la orden del día e integrar la carpeta de informes y asuntos a tratar en las sesiones, que someterá a autorización del presidente;

II. Remitir las Convocatorias del presidente a las reuniones del Comité Técnico y la carpeta de los asuntos listados, o convocar a sesión por instrucciones del presidente;

III. a **VII.** …"

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 16/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 7 y 9, fracciones I y II, del diverso Acuerdo General 48/2013, que constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de quince de abril de dos mil quince, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza y Manuel Ernesto Saloma Vera.—México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 30 DE ABRIL DE 2015).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 48/2013, que constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1400.

ACUERDO GENERAL 17/2015, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 23/2011, RELATIVO A LA DENOMINACIÓN, RESIDENCIA, COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO Y FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EJECUCIÓN DE PENAS, EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO; ASÍ COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ANTES REFERIDOS.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

TERCERO. Con fundamento en la fracción VIII del artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, es facultad de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, el acordar las acciones tendentes a la adecuada y pronta instalación y cambio de domicilio de los órganos jurisdiccionales dentro de la misma ciudad o localidad;

CUARTO. En términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, si bien ejercen jurisdicción territorial en toda la República Mexicana, su sede se ubica en el Segundo Circuito; de ahí que, ante el cambio de domicilio, se haga necesaria la modificación de aquél;

QUINTO. El artículo 17 constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual hace necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional invocado; por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal estima conveniente realizar el cambio de residencia de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta el servicio; y

SEXTO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el cambio de residencia de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta el servicio.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los numerales **PRIMERO** y **QUINTO**, así como el título del Acuerdo General 23/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de

Penas, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos, para quedar como sigue:

"**ACUERDO GENERAL 23/2011, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DENOMINACIÓN, RESIDENCIA, COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO Y FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EJECUCIÓN DE PENAS, EN EL DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ANTES REFERIDOS.**

"**PRIMERO.** El domicilio de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas será en Avenida Insurgentes Sur No. 2065, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, C.P. 01000.

"**QUINTO.** La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, con sede en Avenida Insurgentes Sur No. 2065, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, C.P. 01000, prestará servicio a los juzgados a que se refiere este acuerdo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Los órganos jurisdiccionales y la Oficina de Correspondencia Común a que se refiere el Acuerdo General 23/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en el Distrito Federal; así como a las reglas de turno, sistema de

recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos, deberán colocar avisos en lugares visibles en relación a su cambio de domicilio.

CUARTO. Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas y la Oficina de Correspondencia que les presta servicio, iniciarán funciones en su nuevo domicilio el 27 de abril de 2015.

QUINTO. A partir de la fecha señalada en el transitorio anterior, toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales en cita, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio precisado en el artículo **PRIMERO** del Acuerdo General 23/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en el Distrito Federal; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos.

SEXTO. El Instituto Federal de Defensoría Pública, en su ámbito de competencia, adoptará las medidas necesarias que se relacionen con el cumplimiento de este acuerdo.

SÉPTIMO. Se adiciona el número 5 a la fracción I, del numeral SEGUNDO; así como un tercer párrafo a la fracción I, del numeral CUARTO y se deroga el número 4, de la fracción II del numeral SEGUNDO; así como el quinto párrafo de la fracción II, del numeral CUARTO del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"**SEGUNDO.** …

"**I.** …

"**1.** a **4.** …

"**5.** Tres Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, todos con sede en el Distrito Federal.

"**II.** …

"**1.** a **3.** …

"**4.** Derogado.

"**III.** a **XXXII.** …

"**CUARTO.** …

"**I.** …

"...

"Los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, ejercerán jurisdicción territorial en toda la República Mexicana.

"**II.** …

"Derogado.

"**III.** a **XXXIII.** …"

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 17/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 23/2011, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintidós de abril de dos mil quince, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza y Manuel Ernesto Saloma Vera.—México, Distrito Federal, a veintidós de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 24 DE ABRIL DE 2015).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 23/2011, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos; que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y, 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los distritos y circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 1675; Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, página 2433, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*; Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127 y en el en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 20/2015, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DEL CUARTO TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO Y JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO, AMBOS DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, GUANAJUATO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, VI y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que son atribuciones del Con-

sejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Juzgados de Distrito;

TERCERO. El artículo 17 constitucional, segundo párrafo, establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se instauró en nuestro país el modelo de justicia penal acusatorio, caracterizado por la oralidad, publicidad, inmediación del Juez y continuidad de los procedimientos. Como resultado de lo anterior, las autoridades locales y federales se encuentran obligadas, por mandato constitucional, a realizar las modificaciones legales y organizacionales necesarias en las instituciones responsables de la administración de justicia penal, de manera tal que a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal.

En cumplimiento a la norma constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal en uso de sus facultades legales, mediante acuerdos generales puede establecer la conclusión de funciones de Juzgados y Tribunales Federales, así como la creación de los nuevos órganos judiciales que conozcan del nuevo Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio;

QUINTO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiocho de enero de dos mil quince, aprobó el Plan Integral de Implementación Inicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal;

SEXTO. Para implementar el nuevo Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio, es necesaria la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Ante la inmediatez que exige la norma constitucional, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, con apoyo en los análisis estadísticos presentados por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, examinó la alternativa, como una medida inmediata, para contar con nuevos espacios, la conclusión de funciones de órganos jurisdiccionales del Centro Auxiliar de la Tercera Región, para el efecto de que en el momento oportuno puedan funcionar los Juzgados del Nuevo Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio.

La medida anterior, tiene como ventaja adicional que el personal que integra los órganos jurisdiccionales que concluyen funciones, se pueda preparar y capacitar en administración de Centros de Justicia Penal Federal y en aspectos jurisdiccionales, mediante los cursos que implemente el Instituto de la Judicatura, según el perfil de los servidores públicos respectivos, para consolidar su formación académica y profesional, en aras de su posible incorporación al nuevo sistema procesal; y

SÉPTIMO. Para la aplicación de la medida descrita en el punto anterior, es necesario que concluyan funciones el Cuarto Tribunal Unitario de Circuito y el Juzgado Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, con domicilio en Carretera Cuatro Carriles Guanajuato-Silao, Glorieta Santa Fe Número 5, Yerbabuena, C.P. 36251, Guanajuato, Guanajuato.

La conclusión de funciones del Cuarto Tribunal Unitario de Circuito y del Juzgado Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, implica que los titulares de dichos órganos jurisdiccionales sean readscritos por la Comisión de Adscripción de conformidad con sus atribuciones.

En la adopción de las medidas a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, se deberá observar lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en su sesión del once de marzo de dos mil quince, así como en las demás disposiciones aplicables.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El treinta de abril de dos mil quince, concluyen sus funciones el Cuarto Tribunal Unitario de Circuito y el Juzgado Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

Los titulares de los órganos jurisdiccionales auxiliares referidos deberán levantar por duplicado un acta administrativa con motivo de la conclusión de sus funciones, remitiendo un ejemplar para su archivo a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos.

Los Libros de Gobierno Electrónicos y reportes estadísticos contenidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de los órganos jurisdiccionales auxiliares, deberán darse por concluidos, asentando en el acta la

certificación correspondiente y su transferencia para resguardo de la Dirección General de Estadística Judicial.

Por lo que hace al archivo físico, actas de visita y demás documentos relacionados con la función jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales de que se trata, serán resguardados por la Administración Regional de la sede, elaborándose el acta de entrega-recepción correspondiente.

Artículo 2. La Secretaría Ejecutiva de Administración y sus respectivas unidades administrativas, se coordinarán entre sí, a fin de realizar las adaptaciones correspondientes a los espacios que se desocuparán, así como dotar de lo necesario, para que en su momento, puedan iniciar funciones los juzgados que conocerán del nuevo Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio.

Artículo 3. El Instituto de la Judicatura implementará la capacitación, con cursos sobre administración de los Centros de Justicia Penal Federal y aspectos jurisdiccionales, para el personal de los órganos jurisdiccionales auxiliares que concluyen funciones, atendiendo al perfil de los servidores públicos, con el objeto de lograr, en su caso, su incorporación al nuevo Sistema Procesal Penal Federal Acusatorio.

Artículo 4. La Comisión de Adscripción determinará la readscripción de los titulares de los órganos jurisdiccionales que concluyen funciones.

La Dirección General de Recursos Humanos, respetando los derechos laborales del personal de los órganos que concluyen funciones, adoptará las medidas que correspondan, de conformidad a lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en las demás disposiciones aplicables.

Artículo 5. La Coordinación de Administración Regional, se encargará de resguardar y conservar el mobiliario y equipo; y demás accesorios asignados a los órganos jurisdiccionales auxiliares que concluyen funciones.

Artículo 6. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de Adscripción y de Administración, del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, resolverán cualquier cuestión administrativa que se pudiera suscitar con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Se faculta a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, para suspender con toda oportunidad el envío de asuntos a los órganos jurisdiccionales auxiliares que concluyen funciones, así como determinar el returno de los que tengan en existencia, a efecto de que en la fecha señalada para el fin de sus actividades, no cuenten con expedientes pendientes de resolución.

CUARTO. Se reforma el numeral QUINTO, número 3 del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"**QUINTO.** …

1. a 2. …

3. El Centro Auxiliar de la Tercera Región, se integrará por cinco Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, cuatro con sede en Guadalajara, Jalisco y uno con residencia en Morelia, Michoacán; cinco Tribunales Unitarios de Circuito Auxiliares, tres con residencia en Guanajuato, Guanajuato y dos con sede en Guadalajara, Jalisco, y dos Juzgados de Distrito Auxiliares, uno con residencia en Guanajuato, Guanajuato y uno con sede en Uruapan, Michoacán.

4. a 11. …

…"

QUINTO. Se reforma el numeral PRIMERO del Acuerdo General 18/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, para quedar como sigue:

"**PRIMERO. CONFORMACIÓN, UBICACIÓN, COMPETENCIA Y DENOMINACIÓN.** El Centro Auxiliar de la Tercera Región, está conformado por cinco Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, cuatro con sede en Guadalajara, Jalisco y uno con residencia en Morelia, Michoacán; cinco Tri-

bunales Unitarios de Circuito Auxiliares, tres con residencia en Guanajuato, Guanajuato, y dos con sede en Guadalajara, Jalisco y, dos Juzgados de Distrito Auxiliares, uno con residencia en Guanajuato, Guanajuato y uno con sede en Uruapan, Michoacán.

Todos los órganos jurisdiccionales antes mencionados, tendrán jurisdicción en toda la República y competencia mixta, para apoyar en el dictado de sentencias, su denominación será la siguiente:

I. Los Tribunales Colegiados de Circuito se denominarán:

a) Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.

b) Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.

c) Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán.

d) Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.

e) Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.

II. Los Tribunales Unitarios se denominarán:

a) Primer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

b) Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

c) Tercer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

d) Sexto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.

e) Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.

III. Los Juzgados de Distrito se denominarán:

a) Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato.

b) Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 20/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Cuarto Tribunal Unitario de Circuito y Juzgado Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintidós de abril de dos mil quince, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza y Manuel Ernesto Saloma Vera.—México, Distrito Federal, a veintidós de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 29 DE ABRIL DE 2015).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, 18/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559; y, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 2541, respectivamente.

ACUERDO CCNO/8/2015 DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL PERIODO DE EXCLUSIÓN DEL TURNO DE NUEVOS ASUNTOS A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO

DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN MATAMOROS.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Juzgados de Distrito, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de su competencia, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos de los artículos 41 y 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mil catorce, aprobó el Acuerdo General 21/2014 del propio Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de agosto de dos mil catorce.

En dicho acuerdo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el nuevo órgano jurisdiccional iniciara funciones el uno de sep-

tiembre de dos mil catorce, asimismo, se acordó un periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos que comprendió del uno al treinta de septiembre de dos mil catorce. Lo anterior, con el objetivo de nivelar las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito de mérito;

CUARTO. El punto CUARTO del referido Acuerdo General 21/2014, facultó a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para concluir de manera anticipada o prorrogar el plazo de exclusión de turno de nuevos asuntos de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros;

QUINTO. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos mediante el Acuerdo CCNO/26/2014 de la propia Comisión, publicado en el citado diario oficial el once de diciembre de dos mil catorce, concedió un segundo periodo de exclusión temporal del turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, que comprendió del uno al treinta y uno de enero del año en curso.

Del análisis de los resultados estadísticos proporcionados por los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado Tamaulipas, con residencia en Matamoros, respecto de los diferentes tipos de asuntos ingresados en el mencionado periodo en que fueron excluidos de turno los Juzgados Primero y Segundo de la especialidad y sede de referencia, se considera necesario otorgar un nuevo periodo de exclusión tendente a nivelar las cargas de trabajo entre los referidos órganos jurisdiccionales.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se excluye temporalmente del turno de nuevos asuntos, en días y horas hábiles, a los Juzgados Primero y Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros.

SEGUNDO. El periodo de exclusión del turno para los Juzgados de Distrito antes citados, comprenderá del dieciséis de abril al quince de mayo de dos mil quince; por lo tanto, todos los asuntos nuevos que se presenten dentro del referido periodo, en la mencionada oficina de correspondencia común que les presta servicio, se remitirán conforme al sistema computarizado que se

utiliza para esos efectos al Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros.

En el periodo indicado continuará la aplicación de las reglas de turno relacionado fijadas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Durante el lapso de exclusión de turno no se modifica el calendario de guardias de turno en días y horas inhábiles de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, regulado en el punto SEXTO del Acuerdo General 21/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Transcurrido el plazo señalado del periodo de exclusión de turno a que se refiere el punto anterior, los asuntos nuevos se distribuirán entre todos los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, conforme al sistema computarizado utilizado para tales efectos.

CUARTO. Al finalizar el periodo de exclusión de turno a que se refiere el presente acuerdo y dentro de los tres días hábiles siguientes, los titulares de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, deberán informar a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, y a la Dirección General de Estadística Judicial sobre la productividad obtenida.

El informe a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener las columnas relativas a la existencia de asuntos al inicio del periodo respecto de las causas penales y comunicaciones oficiales recibidas y libradas, ingresos, egresos y la existencia final; así como, el desglose de los ingresos de conformidad con los siguientes rubros:

- Tipo de asunto
- Tipo de delito
- Número de tomos del expediente y fojas útiles de cada uno.

QUINTO. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal resolverá las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación de este acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

TERCERO. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, fijará avisos en lugar visible, con relación a la medida materia del presente acuerdo.

EL MAGISTRADO JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS, SECRETARIO EJECUTIVO DE CARRERA JUDICIAL Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo CCNO/8/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, fue aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el seis de abril de dos mil quince, por los señores consejeros: presidente Felipe Borrego Estrada, Alfonso Pérez Daza y Martha María del Carmen Hernández Álvarez.—México, Distrito Federal, a seis de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 16 DE ABRIL DE 2015).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 21/2014, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la materia, entidad y sede mencionadas; que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y, CCNO/26/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial*

de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 2041; Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127; y, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 907, respectivamente.

ACUERDO CCNO/9/2015 DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL PERIODO DE EXCLUSIÓN DEL TURNO DE NUEVOS ASUNTOS A LOS JUZGADOS PRIMERO A DÉCIMO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, VI y XXIV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Juzgados de Distrito, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de su competencia, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos de los artículos 41 y 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dieciocho de febrero de dos mil quince, aprobó el Acuerdo General 6/2015

del propio Pleno, relativo a la denominación, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la materia y sede mencionadas, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

En dicho acuerdo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el nuevo órgano jurisdiccional iniciara funciones el uno de marzo de dos mil quince, asimismo, se acordó un periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos que comprendió del uno al ocho de marzo de dos mil quince. Lo anterior, con el objetivo de nivelar las cargas de trabajo entre los Juzgados de Distrito de mérito;

CUARTO. El artículo 3, párrafo último, del Acuerdo General 6/2015, facultó a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para concluir de manera anticipada, ampliar o fijar un nuevo periodo, en su caso, del plazo de exclusión de turno de nuevos asuntos.

QUINTO. Del análisis de los resultados estadísticos proporcionados por los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, respecto de los diferentes tipos de asuntos ingresados en el mencionado periodo en que fueron excluidos de turno los Juzgados Primero a Décimo Tercero de Distrito de la especialidad y sede de referencia, se considera necesario otorgar un nuevo periodo de exclusión tendente a nivelar las cargas de trabajo entre los referidos órganos jurisdiccionales, únicamente por lo que se refiere a los procesos civiles federales.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se excluye temporalmente del turno de nuevos asuntos relativos a procesos civiles federales, en días y horas hábiles, a los Juzgados Primero a Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

SEGUNDO. El periodo de exclusión del turno para los Juzgados de Distrito antes citados, comprenderá del uno al quince de mayo de dos mil quince; por lo tanto, todos los asuntos nuevos relativos a procesos civiles

federales que se presenten dentro del referido periodo, en la mencionada oficina de correspondencia común que les presta servicio, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.

En el periodo indicado continuará la aplicación de las reglas de turno relacionado fijadas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Durante el lapso de exclusión de turno no se modifica el calendario de guardias de turno en días y horas inhábiles de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, regulado en el artículo tercero transitorio del Acuerdo General 6/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Transcurrido el plazo señalado del periodo de exclusión de turno a que se refiere en punto anterior, los asuntos nuevos se distribuirán entre todos los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, conforme al sistema computarizado utilizado para tales efectos.

CUARTO. Al finalizar el periodo de exclusión de turno a que se refiere el presente acuerdo y dentro de los cinco días hábiles siguientes, los titulares de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, deberán informar a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, y a la Dirección General de Estadística Judicial sobre la productividad obtenida.

El informe a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener las columnas relativas a la existencia de asuntos al inicio del periodo, los ingresos, los egresos y la existencia final, respecto del número de juicios de amparo y procesos civiles federales; así como, el número de asuntos en trámite y con audiencia celebrada pendiente de dictar sentencia.

QUINTO. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal resolverá las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación de este acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

TERCERO. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, fijará avisos en lugar visible, en relación con la medida objeto del presente acuerdo.

EL MAGISTRADO JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS, SECRETARIO EJECUTIVO DE CARRERA JUDICIAL Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo CCNO/9/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero a Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, fue aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el veinte de abril de dos mil quince, por los Consejeros: Presidente Felipe Borrego Estrada y Alfonso Pérez Daza.—México, Distrito Federal, a veinte de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 30 DE ABRIL DE 2015).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 6/2015, relativo a la denominación, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la materia y sede mencionadas; y el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2970 y Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127, respectivamente.

ACUERDO CCNO/10/2015 DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DEL JUZGADO SEXTO DE

DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

TERCERO. En sesión del veinticinco de septiembre de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, mismo que en la fracción VIII de su artículo 42, faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, el acordar las acciones tendentes a la adecuada y pronta instalación y cambio de domicilio de los órganos jurisdiccionales dentro de la misma ciudad o localidad;

CUARTO. El artículo 17 constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual hace necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional invocado; por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal estima conveniente realizar el cambio de domicilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza el cambio de domicilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.

SEGUNDO. El nuevo domicilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal será en Eduardo Molina No. 2, Colonia del Parque, Delegación Venustiano Carranza, México, Distrito Federal, C.P. 15960.

TERCERO. El órgano jurisdiccional citado en el punto primero iniciará funciones en su nuevo domicilio de acuerdo a lo siguiente:

Órgano Jurisdiccional	Fecha de inicio de funciones en el nuevo domicilio
Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal.	27 de abril de 2015

CUARTO. A partir de la fecha señalada en el punto que antecede, toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la competencia del órgano jurisdiccional en cita, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio precisado en el punto segundo de este acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

TERCERO. Para conocimiento del público en general, publíquese el acuerdo de mérito en la página del Consejo de la Judicatura Federal, como aviso importante.

El órgano judicial a que se refiere este acuerdo, deberá colocar avisos en lugares visibles en relación a su cambio de domicilio.

EL MAGISTRADO JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS, SECRETARIO EJECUTIVO DE CARRERA JUDICIAL Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo CCNO/10/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, fue aprobado por la propia comisión en sesión privada ordinaria celebrada el veinte de abril de dos mil quince, por los señores consejeros: presidente Felipe Borrego Estrada y Alfonso Pérez Daza.—México, Distrito Federal, a veinte de abril de dos mil quince (D.O.F. DE 30 DE ABRIL DE 2015).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdo generales citado, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647.

SÉPTIMA PARTE
ÍNDICES

Índice General Alfabético de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

	Número de identificación	Pág.
ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO "PADRASTRO" PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.	I.9o.P.75 P (10a.)	1655
ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES.	I.1o.A.E.48 A (10a.)	1655
ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU RESOLUCIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LO QUE SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE NUEVE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.2o.C.57 C (10a.)	1656
ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. LOS CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES EMANADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, COMO LA ORDEN DE TRASLADO DEL SENTENCIADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO.	III.2o.P.75 P (10a.)	1657
ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN,		

	Número de identificación	Pág.
BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS.	P./J. 7/2015 (10a.)	5
ACTUACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SON VÁLIDAS LAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD DECLARADA INCOMPETENTE POR DECLINATORIA Y, POR TANTO, LAS REALIZADAS POSTERIORMENTE, AL SER INDEPENDIENTES Y NO VERSE AFECTADAS DEBEN CONSERVARSE.	I.3o.C.218 C (10a.)	1657
ACTUACIONES JUDICIALES CARENTES DE FIRMA Y/O NOMBRE Y APELLIDO DE QUIENES EN ELLAS INTERVIENEN. AL CARECER DE EFICACIA JURÍDICA, DEBEN DECLARARSE INVÁLIDAS, LO QUE GENERA SU NULIDAD [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.) A LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA].	(IX Región)1o.3 K (10a.)	1658
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y OFICINAS FEDERALES DEL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y SE DELEGAN FACULTADES EN SUS TITULARES. SU ARTÍCULO 3 NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA PARTE CORRESPONDIENTE AL CITARSE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL.	VI.1o.A.87 A (10a.)	1660
AMPARO ADHESIVO. EL TERCERO INTERESADO QUE LO PROMUEVE NO SE CONVIERTE EN UN QUEJOSO ADHERENTE, SINO QUE CONSERVA ESE CARÁCTER.	XXVII.3o.76 K (10a.)	1660

	Número de identificación	Pág.
AMPARO ADHESIVO. LO QUE JUSTIFICA SU ESTUDIO ES LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PRINCIPAL.	XI.1o.A.T.20 K (10a.)	1661
AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS.	PC.V. J/1 A (10a.)	949
AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA [ABANDONO DE LAS TESIS 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) Y 2a. LXXVI/2014 (10a.) (*)].	2a. XXII/2015 (10a.)	833
AMPARO DIRECTO. NO ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO EN LA CAUSA DE ORIGEN CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, SI EL SENTENCIADO TAMBIÉN HIZO VALER ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN EL CUAL FUE ADMITIDO POR EL TRIBUNAL UNITARIO SEÑALADO POR AQUÉL COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.	III.2o.P.74 P (10a.)	1662
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE		

	Número de identificación	Pág.
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)].	(V Región)5o.20 L (10a.)	1663
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).	1a./J. 8/2015 (10a.)	478
ARRAIGO. EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 4 DE ENERO DE 2012, QUE PERMITÍA DECRETARLO CONTRA EL INDICIADO, SIN ESPECIFICAR RESPECTO DE QUÉ DELITOS, VULNERA EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	VI.2o.P.21 P (10a.)	1665
ARRENDAMIENTO. EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE RENTAS, NO PUEDEN CONSIDERARSE USURARIOS SI NO REBASAN LA SUERTE PRINCIPAL.	I.3o.C.170 C (10a.)	1666
ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X –PRIMERA PARTE–, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN.	PC.V. J/3 A (10a.)	1014

	Número de identificación	Pág.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. SU PRESIDENTE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.	I.1o.A.25 K (10a.)	1669
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA DETERMINAR DERECHOS POR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SE CONFIGURA EN EL PLAZO DE CINCO AÑOS, CONTADO A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ O DEBIÓ HABERSE PRESENTADO LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE SEA APLICABLE EL DE DIEZ, AL NO TRATARSE DE UNA CONTRIBUCIÓN CALCULADA POR EJERCICIOS.	I.1o.A.E.42 A (10a.)	1671
CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)].	II.1o.18 P (10a.)	1693
COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO		

	Número de identificación	Pág.
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	2a. XVI/2015 (10a.)	834
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN.	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DETERMINAR Y CALIFICAR EN DEFINITIVA UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.	I.3o.P.23 P (10a.)	1694
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO O AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNE TOTAL O PARCIALMENTE UN RÉGIMEN FISCAL OPTATIVO, CUYA IMPLEMENTACIÓN OBEDECE A FINES EXTRAFISCALES.	2a. XIII/2015 (10a.)	835
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS APLICADOS AL QUEJOSO EN UNA SENTENCIA DE NULIDAD PREVIA A LA RECLAMADA, DICTADA ÉSTA EN CUMPLIMIENTO DE		

	Número de identificación	Pág.
LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, AL NO HABER CONTROVERTIDO PREVIAMENTE ESE ASPECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.	IV.2o.A.82 K (10a.)	1695
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD.	IV.2o.A.83 K (10a.)	1697
CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.	(V Región)2o.1 K (10a.)	1699
CONCURSO MERCANTIL. LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN RELATIVA DEBE ACOMPAÑARSE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO ANTE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA).	I.3o.C.180 C (10a.)	1700
CONCURSO MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES LA SOLICITUD DE SU DECLARACIÓN, DEBE ACOMPAÑARSE DE UN DOCUMENTO PÚBLICO DONDE CONSTE LA MANIFESTACIÓN DE LOS SOCIOS PARA DECLARARSE EN MORA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VII, DE LA LEY RELATIVA).	I.3o.C.179 C (10a.)	1701
CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO DECLINA SU		

	Número de identificación	Pág.
COMPETENCIA EN FAVOR DEL JUZGADO "EN TURNO" EN UN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, Y LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE ESE LUGAR SE NIEGA A RECIBIR EL OFICIO CORRESPONDIENTE, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE ESTÁ IMPOSIBILITADA LEGALMENTE PARA HACERLO.	VI.2o.P.4 K (10a.)	1702
CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE SI UN JUZGADO DE DISTRITO LO PLANTEA ENTRE ÉL Y EL QUE SE ENCUENTRE "EN TURNO" EN UN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SIN QUE SE ADVIERTA PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL EN ESPECÍFICO, EN EL SENTIDO DE QUE NO ACEPTA CONOCER DEL ASUNTO SOMETIDO A SU JURISDICCIÓN.	VI.2o.P.5 K (10a.)	1702
CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL LAUDO QUE LOS RESUELVE, PERMITE AL JUZGADOR EXAMINAR NO SÓLO LOS ASPECTOS FORMALES DE ESA DECISIÓN, SINO INCLUSO, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA ACTORA.	P. IV/2015 (10a.)	159
CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES FUNDAMENTAL EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL REALIZADA POR LA JUNTA RESPONSABLE, DADA SU ESPECIAL RELEVANCIA.	P. V/2015 (10a.)	160
CONSTANCIAS REMITIDAS CON EL INFORME JUSTIFICADO. NO PUEDE NEGARSE AL QUEJOSO IMPONERSE DE ÉSTAS, AUN CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) LAS HAYA ESTIMADO COMO RESERVADAS, SI PUEDE ELABORAR UNA VERSIÓN DE AQUÉLLAS PARA PONERSE A LA VISTA DE LAS PARTES, Y SIN VIOLAR EL SIGILO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA		

	Número de identificación	Pág.
AVERIGUACIÓN PREVIA –DE DONDE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO–, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.	II.2o.P.14 K (10a.)	1703
CONSTITUCIÓN. SU CONCEPCIÓN COMO NORMA JURÍDICA.	1a. CXXXV/2015 (10a.)	485
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA USO COMERCIAL. LAS PARTES PUEDEN ESTABLECER A QUIÉN CORRESPONDERÁ OBTENER LA LICENCIA DE USO DE SUELO, CUANDO LA LOCALIDAD ARRENDADA SE DESTINA A UN GIRO COMERCIAL DISTINTO AL PREVISTO EN AQUÉLLA.	I.3o.C.165 C (10a.)	1705
CONTRATO DE FIDEICOMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO.	I.3o.C.157 C (10a.)	1705
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. LA FALTA DE FIRMA COMO SIGNO NECESARIO DE LA EXPRESIÓN DE VOLUNTAD DE QUIEN DEBE OBLIGARSE AL PAGO, NO PUEDE SUBSANARSE CON PRUEBAS INDIRECTAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).	I.3o.C.177 C (10a.)	1706
CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ		

	Número de identificación	Pág.
DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).	2a./J. 17/2015 (10a.)	699
COPROPIEDAD. NO EXISTE SI EL MATRIMONIO SE CELEBRA BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004).	I.3o.C.155 C (10a.)	1707
COSA JUZGADA. NO OPERA TRATÁNDOSE DEL DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA NUEVAMENTE CONTRA UNA SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN DICTADA ANTES DEL 3 DE ABRIL DE 2013, CUANDO AQUÉLLA PREVIAMENTE SE DESECHÓ POR CONSIDERARSE QUE EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA NUEVA LEY DE LA MATERIA PRECLUYÓ CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA, NO OBSTANTE QUE LA PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 39/2014 (10a.), SE LLEVARA A CABO POSTERIORMENTE.	VI.2o.P.7 K (10a.)	1708
COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO,		

	Número de identificación	Pág.
ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.	I.3o.C.183 C (10a.)	1709
COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	PC.XXX. J/11 C (10a.)	1121
COSTAS EN JUICIOS DE DIVISIÓN DE COPROPIEDAD. SU CUANTIFICACIÓN DEBE ATENDER SÓLO AL VALOR DE LA PARTE ALÍCUOTA DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE EXCLUIR DE LO INDIVISO Y NO SOBRE SU TOTALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.1o.C.21 C (10a.)	1710
CRÉDITO PREFERENTE EN MATERIA LABORAL. TIENE ESE CARÁCTER EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS.	(V Región)5o.22 L (10a.)	1711
CRÉDITOS PREFERENTES EN MATERIA LABORAL. LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAS VACACIONES NO TIENEN ESE CARÁCTER.	(V Región)5o.21 L (10a.)	1712
CULPABILIDAD. LA PONDERACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SENTENCIADO PARA DISTINGUIR "EL BIEN DEL MAL" COMO UN ASPECTO PARA DETERMINAR SU GRADO, ES UNA PRÁCTICA CONTRARIA AL PARADIGMA DEL DERECHO PENAL DE ACTO.	VI.2o.P.24 P (10a.)	1712
DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. EL MECANISMO PARA DETERMINAR EL MONTO QUE LOS		

	Número de identificación	Pág.
GARANTICE, DEBE CONSIDERAR LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE VEINTIOCHO DÍAS, QUE EQUIVALE A UN MES; LA CUANTÍA DEL NEGOCIO Y EL TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 110/2013 (10a.)].	III.2o.C.8 K (10a.)	1715
DELITO CONTRA LA SALUD. NO SE ACREDITA LA MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN EN SU HIPÓTESIS DE COMPRA AGRAVADA (POR ENCONTRARSE EL INCULPADO A MENOS DE TRESCIENTOS METROS DE UN CENTRO EDUCATIVO), SINO LA DIVERSA DE POSESIÓN SIMPLE, SI QUIEN LO COMETIÓ ES FARMACODEPENDIENTE Y LA CANTIDAD QUE ADQUIRIÓ ES MENOR O IGUAL A LA PREVISTA EN LA TABLA DE ORIENTACIÓN DE DOSIS MÁXIMAS DE CONSUMO PERSONAL E INMEDIATO.	I.9o.P.77 P (10a.)	1716
DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	XXVII.1o.1 A (10a.)	1717
DERECHO A LA HABITACIÓN. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO COMO PARTE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PARA LOS MENORES DE EDAD.	I.3o.C.153 C (10a.)	1719
DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA		

	Número de identificación	Pág.
DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.	1a./J. 29/2015 (10a.)	240
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN.	XXVII.3o. J/14 (10a.)	1451
DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR		

	Número de identificación	Pág.
LA APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HIJOS Y BIENES.	I.3o.C.171 C (10a.)	1721
DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE.	I.3o.C. J/11 (10a.)	1487
EMBARGO JUDICIAL. EL JUEZ QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DE DONDE DERIVA ESE GRAVAMEN (JUICIO NATURAL), ES EL COMPETENTE PARA DETERMINAR EXPRESAMENTE SI PROCEDE O NO, POR CADUCIDAD, LA CANCELACIÓN O LA ANOTACIÓN REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL).	I.3o.C.186 C (10a.)	1723
EMBARGO JUDICIAL. SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3010, 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL).	I.3o.C.190 C (10a.)	1724
EMBARGOS. SI SE ORDENA SU CANCELACIÓN SOBRE LOS CONSTITUIDOS SOBRE UN INMUEBLE ADJUDICADO JUDICIALMENTE, SON INEFICACES EN TANTO NO PUEDEN RECAER EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, PUES ÉSTA NO ES CONSTITUTIVA DE DERECHOS.	VII.2o.C.90 C (10a.)	1725
ESCENA DEL CRIMEN. PARA LA VALORACIÓN DE VESTIGIOS QUE PUEDEN SER DE SANGRE, ES		

	Número de identificación	Pág.
NECESARIO QUE SE ACREDITE TAL NATURALEZA MEDIANTE LOS POSTERIORES EXÁMENES DE LABORATORIO.	1a. CXXXIV/2015 (10a.)	503
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.	2a./J. 26/2015 (10a.)	640
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD.	2a./J. 27/2015 (10a.)	641
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	1a./J. 20/2015 (10a.)	330
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES CONSTITUCIONAL.	1a. CXXIX/2015 (10a.)	504
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXX/2015 (10a.)	505
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL CÓNYUGE QUE AFIRMA TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN, APOYADO EN LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE LO UNE CON EL DEMANDADO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERVENIR EN EL JUICIO RELATIVO, AUNQUE TAL RÉGIMEN PATRIMONIAL NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.	1a. CXXVI/2015 (10a.)	506

	Número de identificación	Pág.
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO.	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.	1a./J. 23/2015 (10a.)	331
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY RESPECTIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, CUYA TRANSGRESIÓN PUEDA DAR LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O A DESESTIMAR LA PRETENSIÓN.	1a. CXXV/2015 (10a.)	510
EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.	1a./J. 19/2015 (10a.)	333
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO B, DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL "OCULTAMIENTO".	1a. CXXXI/2015 (10a.)	510
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA		

	Número de identificación	Pág.
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE.	1a./J. 18/2015 (10a.)	335
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.	1a./J. 14/2015 (10a.)	422
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA.	1a./J. 21/2015 (10a.)	340
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE ACTOS PREPARATORIOS DE LA ACCIÓN RESPECTIVA, CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).	1a. CXXXII/2015 (10a.)	512
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA PUEDE SER ACREDITADA POR EL AFECTADO CON LOS ELEMENTOS DE PRUEBA O INDICIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE, RAZONABLEMENTE, CONDUZCAN AL JUZGADOR A LA CONVICCIÓN DE QUE SU ORIGEN ES LEGAL.	1a./J. 17/2015 (10a.)	342
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL		

	Número de identificación	Pág.
RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXVIII/2015 (10a.)	513
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXXVII/2015 (10a.)	514
EXTINCIÓN DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, LA ACCIÓN RELATIVA ESTÁ SUJETA A QUE EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL EMITA ALGUNA DECISIÓN EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL.	1a./J. 22/2015 (10a.)	344
EXTINCIÓN DE DOMINIO. RELEVANCIA DE LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA.	1a./J. 16/2015 (10a.)	346
FALSA REPRESENTACIÓN. NO SE ACTUALIZA ESA VIOLACIÓN PROCESAL EN CASO DE QUE UNA DE LAS PARTES HUBIERA TENIDO UN DEFICIENTE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN UN JUICIO POR PARTE DEL PROFESIONISTA QUE DESIGNÓ PARA SU DEFENSA.	I.1o.A.24 K (10a.)	1727
FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA PUEDE REALIZARSE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA		

	Número de identificación	Pág.
COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO.	VII.4o.P.T.16 P (10a.)	1728
FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997", DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012.	2a./J. 20/2015 (10a.)	760
FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	I.1o.A.5 CS (10a.)	1729
GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO.	I.8o.C. J/1 (10a.)	1497
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SUS ATRIBUCIONES, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL, SON TAMBIÉN DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO.	XI.1o.A.T.46 A (10a.)	1731
GUARDA Y CUSTODIA. SI EN LA CONTIENDA DE DIVORCIO SE ESTABLECIÓ QUE LA TENDRÍA LA MADRE Y A LA MUERTE DE ÉSTA LOS ABUELOS		

	Número de identificación	Pág.
MATERNOS LA EJERCIERON DE HECHO Y EL PADRE, EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, PRETENDE RECUPERAR AQUÉLLA, DEBE HACERLO MEDIANTE JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.C.91 C (10a.)	1732
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO.	P./J. 4/2015 (10a.)	6
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.	P./J. 5/2015 (10a.)	8
IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO EN REVISIÓN. LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO RIGE CUANDO ES LA PROPIA QUEJOSA QUIEN SOLICITA SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO.	XXIV.1o.3 K (10a.)	1733
IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. EN CASO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTUDIE LA CAUSA ADUCIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES AL SOBRESEER POR UN MOTIVO DISTINTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA ESA DETERMINACIÓN, PUEDE ACOGER		

	Número de identificación	Pág.
AQUÉLLA SIN NECESIDAD DE DAR VISTA PREVIAMENTE AL RECURRENTE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	VII.1o.A. J/1 (10a.)	1505
INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. AUN CUANDO ESTÁ RELACIONADA CON UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SÓLO PUEDE SER PROMOVIDO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.	I.1o.A.21 K (10a.)	1733
INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	XXVII.3o.75 K (10a.)	1734
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ESTÁ OBLIGADO A RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE INTERCONEXIÓN INICIADOS A INSTANCIA DE PARTE.	I.1o.A.E.49 A (10a.)	1735
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO MENOR DE EDAD CUANDO RECLAMA QUE LO PRIVARON DE CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMARIA), SIN QUE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE (AUTORIDAD RESPONSABLE) LE EXPRESARA LAS RAZONES Y LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES OBSTACULIZÓ EL EJERCICIO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.	VIII.1o.P.A.1 K (10a.)	1736
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NO DEBE INTERPRETARSE AL GRADO DE TENER POR ACREDITADO UN DELITO QUE NO SATISFACE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL RESPECTIVO.	I.9o.P.76 P (10a.)	1737

	Número de identificación	Pág.
INTERESES USURARIOS. EL ELEMENTO NOTORIEDAD RESULTA INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN OFICIOSA DE LOS PACTADOS.	I.3o.C.189 C (10a.)	1738
JORNADA EXTRAORDINARIA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL TRABAJADOR CUANDO LA RECLAMADA EXCEDE DE 9 HORAS SEMANALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	I.9o.T.44 L (10a.)	1741
JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ANÁLISIS QUE DEBEN REALIZAR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.	2a. XXIII/2015 (10a.)	836
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.	PC.XIII. J/2 A (10a.)	1161
JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. EL MERO ABANDONO DEL INMUEBLE ARRENDADO NO LO DEJA SIN MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	XXII.1o.5 C (10a.)	1742
JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. NO QUEDA SIN MATERIA POR LA MUERTE DEL ARRENDATARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	XXII.1o.4 C (10a.)	1742
LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA TIENE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		

	Número de identificación	Pág.
PARA PROMOVERLO CONTRA LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA QUE PUEDE AFECTAR EL INMUEBLE EN EL QUE REALIZA SUS FUNCIONES, OTORGADA CON APOYO EN UNA LEY ANTE LA QUE SE ENCUENTRA EN UN PLANO DE IGUALDAD CON QUIEN GESTIONÓ A SU FAVOR EL ACTO.	(V Región)5o.24 K (10a.)	1743
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS.	1a. CXXXIII/2015 (10a.)	516
LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA.	PC.IV.A. J/9 A (10a.)	1262
MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN.	XI.1o.A.T.18 K (10a.)	1745
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD		

	Número de identificación	Pág.
PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA).	I.3o.C.160 C (10a.)	1746
MOTÍN. LA ACCIÓN TUMULTUARIA Y VIOLENTA DE UN GRUPO DE PERSONAS PARA IMPEDIR A LA AUTORIDAD POLICIACA LA EJECUCIÓN DE UN MANDATO DE AUTORIDAD NO CONFIGURA DICHO DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.1o.P.28 P (10a.)	1747
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.P.25 P (10a.)	1749
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NO ES SUSCEPTIBLE DE INVOCARSE COMO NOTORIA Y MANIFIESTA, Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE HASTA QUE AQUÉLLA SE ADMITE Y LA LITIS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA.	I.3o.P.26 P (10a.)	1750
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI EL TRABAJADOR PRECISA UN SALARIO QUE EL PATRÓN ACEPTA Y OFRECE EN SU CONTESTACIÓN, PERO DE AUTOS QUEDA DEMOSTRADO		

	Número de identificación	Pág.
QUE AQUÉL PERCIBÍA CIERTA REMUNERACIÓN ADICIONAL EN FORMA ORDINARIA.	I.13o.T.117 L (10a.)	1760
ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA).	(V Región)5o.18 P (10a.)	1761
PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO.	XXVII.3o.77 K (10a.)	1763
PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	III.1o.A.5 K (10a.)	1764
PENSIÓN ANUAL DE VEJEZ. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA BÁSICA MENSUAL E INCREMENTOS ANUALES, DEBE ATENDERSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167 DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL.	I.6o.T.130 L (10a.)	1764
PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA.	PC.XXX. J/12 A (10a.)	1345

	Número de identificación	Pág.
PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO.	PC.V. J/2 A (10a.)	951
PENSIONES. SU CUANTÍA DEBE SER PROPORCIONAL A LO QUE CUANTITATIVAMENTE APORTABA EL TRABAJADOR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN FUNCIÓN DE LO QUE REALMENTE SE LE DESCONTABA PARA EL FONDO RELATIVO Y DEL PORCENTAJE QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA LE CORRESPONDÍA PARA TAL FIN, CON INDEPENDENCIA DE LOS CONCEPTOS O DEL MONTO QUE COMO SUELDO BÁSICO DE COTIZACIÓN APAREZCA EN SU HOJA ÚNICA DE SERVICIOS.	I.2o.A.16 A (10a.)	1765
PENSIONES Y JUBILACIONES. EL DERECHO AL PAGO DE SUS DIFERENCIAS POR INCREMENTOS ES IMPRESCRIPTIBLE.	XI.1o.A.T.23 L (10a.)	1767
PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. PARA ACREDITAR EL CARÁCTER DE ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO PUEDE PRESENTARSE CÉDULA PROFESIONAL, FEDERAL O ESTATAL, EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE.	XVII.1o.C.T.45 L (10a.)	1768
PERSONAS INDÍGENAS. ES INNECESARIO ATENDER A SUS COSTUMBRES, CUANDO SON PARTE EN UN JUICIO QUE INVOLUCRA UN INMUEBLE RESPECTO DEL CUAL PUEDEN EJERCER SUS PRÁCTICAS RESPECTO A LA PROPIEDAD, Y ÉSTE ESTÁ UBICADO FUERA DEL TERRITORIO DE SU COMUNIDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.C.219 C (10a.)	1768

	Número de identificación	Pág.
PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA QUE PROCEDA LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DERIVADA DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, DEBE NOTIFICARSE A LA SECCIÓN SINDICAL CORRESPONDIENTE CON 3 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A SU APLICACIÓN (CLÁUSULA 24 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO).	I.9o.T.43 L (10a.)	1769
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA.	III.2o.A.62 A (10a.)	1770
PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.2o.A.81 K (10a.)	1770
POSESIÓN DE UNIFORMES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FALSIFICADOS. EL ARTÍCULO 250 BIS 1, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ DICHO DELITO NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.	I.9o.P.78 P (10a.)	1771
PREFERENCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. A EFECTO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTORIO DE LA ACCIÓN, ES INSUFICIENTE ACREDITAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE QUIEN SE LE ASIGNÓ EL PUESTO DEMANDADO.	I.13o.T.119 L (10a.)	1787
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU IMPACTO EN EL DESARROLLO		

	Número de identificación	Pág.
EVOLUTIVO DE UNA DEFENSA ADECUADA Y EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA EN MATERIA PENAL.	1a. CXXXVI/2015 (10a.)	516
PRINCIPIO PRO PERSONA. ÚNICAMENTE ES APLICABLE PARA INTERPRETAR LA NORMA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y NO PARA INSTAURAR UN CRITERIO SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.	(IV Región)2o.1 CS (10a.)	1788
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).	XVII.1o.P.A. J/6 (10a.)	1527
PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y SUBSECUENTE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL. EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), EN SU CARÁCTER DE LIQUIDADOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CARECE DE INTERÉS PARA IMPUGNAR LO DETERMINADO EN ÉL.	I.6o.T.128 L (10a.)	1788
PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536

	Número de identificación	Pág.
PRÓRROGA DEL CONTRATO LABORAL. SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE MANERA SUBSIDIARIA A LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO.	I.13o.T.118 L (10a.)	1811
PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES ÚTIL PARA INTERPRETARLAS CUANDO ÉSTAS REGULAN FENÓMENOS COMPLEJOS Y TIENEN EFECTOS ECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS, ENTENDER ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SU EMISIÓN O COMPRENDER SU ALCANCE O LA AFECTACIÓN QUE PROVOCAN.	I.1o.A.E.26 K (10a.)	1812
PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ANALIZAR ASPECTOS TÉCNICOS, SOLICITADA POR LOS PERITOS PARA ELABORAR SU DICTAMEN.	I.1o.A.E.27 K (10a.)	1812
PRUEBA PERICIAL. LA VISTA QUE DEBE DARSE A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN Y FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ESTÁ IMPLÍCITA CON LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL ENJUICIADO Y AL CORRÉRSELE TRASLADO AL DEMANDADO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA, RESPECTIVAMENTE.	I.3o.C.154 C (10a.)	1813
PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE COMPROMETA A PRESENTARLOS.	XIX.1o.A.C.6 C (10a.)	1814
PRUEBAS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. CONFORME AL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SON ADMISIBLES LAS QUE		

	Número de identificación	Pág.
TIENDEN A DESESTIMAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.	VI.2o.P.6 K (10a.)	1815
QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA PROVEER SOBRE EL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI AQUÉLLA JUSTIFICA QUE REALIZÓ LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA TURNARLA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.	XX.2o.3 K (10a.)	1817
RADIODIFUSIÓN. FINALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS RELACIONADAS CON CONTENIDOS.	I.1o.A.E.46 A (10a.)	1819
RADIODIFUSIÓN. LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS, NO AFECTA LA LIBERTAD CONTRACTUAL DE QUIENES NO PERTENEZCAN A ÉSTE Y SE DEDIQUEN A LA REALIZACIÓN O PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS.	I.1o.A.E.47 A (10a.)	1820
RADIODIFUSIÓN. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU RESOLUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR, AL SER OBLIGATORIAS PARA LOS MIEMBROS DE ÉSTE, SUS CAUSAHABIENTES O CESIONARIOS DE SUS DERECHOS O QUIENES RESULTEN DE REESTRUCTURAS CORPORATIVAS O MODIFICACIONES ACCIONARIAS DERIVADAS DE CONCENTRACIONES DE CUALQUIER TIPO A AGENTES VINCULADOS CON		

	Número de identificación	Pág.
ÉL, SON IDÓNEAS Y RAZONABLES PARA ALCANZAR LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PROPIA RESOLUCIÓN.	I.1o.A.E.45 A (10a.)	1820
RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONERSE CONTRA LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y, EVENTUALMENTE, PROCEDE SU AMPLIACIÓN SI SE PRESENTA EN TIEMPO, PERO NO SU DUPLICIDAD CONTRA LA MISMA DETERMINACIÓN [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013].	(I Región)1o.2 K (10a.)	1821
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AUNQUE SÓLO PRETENDA IMPUGNARSE LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	II.2o.A.1 K (10a.)	1822
RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA.	XXVII.1o. J/1 (10a.)	1426
RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ.	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823

	Número de identificación	Pág.
RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DECRETA LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE UN ELEMENTO POR INCUMPLIR UN REQUISITO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN.	I.1o.A.96 A (10a.)	1824
REDUCCIÓN DE LA PENA EN DELITOS GRAVES. EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROCEDE AUN CUANDO EL SUJETO ACTIVO HAYA CONFESADO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO EN VÍA DE PREPARATORIA, SIEMPRE QUE ÉSTA FUERE SU PRIMERA OPORTUNIDAD DE DECLARAR EN TORNO AL HECHO IMPUTADO.	I.5o.P.33 P (10a.)	1825
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES. SU DERECHO DE SER OÍDOS PUEDE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA VIDEOLLAMADA, VÍA *SKYPE*, EN SALVAGUARDA DE SU INTERÉS SUPERIOR, CUANDO LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL LUGAR DEL JUICIO Y SU RESIDENCIA LE OCASIONE VIAJAR Y REALIZAR GASTOS.	I.3o.C.174 C (10a.)	1826
RELACIÓN DE TRABAJO. CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE SU NEGATIVA.	I.6o.T. J/22 (10a.)	1572
REMATE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA, POR SER AUTÓNOMA Y AJENA A LA COSA JUZGADA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [MODIFICACIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.13o.C.7 K (10a.)].	I.13o.C.16 C (10a.)	1827
RENTAS. SI EL DEUDOR NO OPONE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES RENTÍSTICAS,		

	Número de identificación	Pág.
EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZARLA OFICIOSAMENTE.	I.3o.C.176 C (10a.)	1828
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SÓLO CUANDO NO EXISTEN PRUEBAS DIRECTAS QUE SIRVAN DE PARÁMETRO PARA FIJAR SU MONTO, ES APLICABLE EL QUE DE FORMA SUBSIDIARIA ESTABLECE (EN DÍAS MULTA) EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.	II.2o.P.32 P (10a.)	1829
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE.	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	I.1o.A.23 K (10a.)	1830
REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	I.1o.A.22 K (10a.)	1831

	Número de identificación	Pág.
RESCISIÓN DE CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA PROBARLA DEBE EXISTIR EL REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DOMICILIO DEL DEUDOR, SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2082 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).	**REPUBLICADA POR ACLARACIÓN** I.3o.C.690 C (9a.)	1832
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR UN MOTIVO RAZONABLE DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA, CONFORME AL ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.	IV.3o.T.27 L (10a.)	1833
RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU CONCEPTO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2014 (10a.) (*)].	2a. XXI/2015 (10a.)	837
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	2a./J. 19/2015 (10a.)	783
RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS		

	Número de identificación	Pág.
SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE.	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92).	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS.	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES.	2a. XVII/2015 (10a.)	839
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS		

	Número de identificación	Pág.
TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO.	2a./J. 25/2015 (10a.)	827
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTENTADOS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIONES II, PÁRRAFO PRIMERO, INCISO D), III, PÁRRAFO ÚLTIMO, IV, V Y VI, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA, DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA NOTIFICACIÓN AL CONGRESO LOCAL DE LA SENTENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE DECLARÓ LA INVALIDEZ DE DICHAS PORCIONES NORMATIVAS Y LA ENTRADA EN VIGOR DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE OCTUBRE DE 2012, DEBEN DECLARARSE NULOS.	III.1o.A.20 A (10a.)	1835
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL VICIO QUE ORIGINÓ LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO DEBE SER SUBSANADO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA COMO CONDICIÓN PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO.	I.1o.A.98 A (10a.)	1836
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES SOSTENIDAS EN JUICIOS DE AMPARO RESUELTOS PREVIAMENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE RECONOCIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CUYA INVALIDEZ IMPUGNA EL RECURRENTE HASTA EL ESCRITO DE REVISIÓN, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO.	2a. XIX/2015 (10a.)	840

	Número de identificación	Pág.
REVISIÓN EN AMPARO. EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.	(I Región)4o.5 K (10a.)	1837
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI AL EJERCER SU COMPETENCIA DELEGADA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DESESTIMAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO O LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL, TAL DECISIÓN NO VINCULA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	2a. XXIV/2015 (10a.)	841
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EN CUANTO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO, PUEDE SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS NOTARIOS PÚBLICOS.	XI.1o.A.T.47 A (10a.)	1839
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN.	PC.IV.A. J/11 A (10a.)	1088
SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 37, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LABORAL NO VIOLA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (ORDENAMIENTO ABROGADO POR EL REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y APLICACIÓN DE SANCIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN VIGOR A LOS TRES MESES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN).	VI.1o.A.88 A (10a.)	1839

	Número de identificación	Pág.
SEGURIDAD PÚBLICA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE ESE TIPO DE CORPORACIONES, ASÍ COMO DE SUPRIMIR LA INSCRIPCIÓN DE SU SEPARACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, SE DEBE CONSIDERAR QUE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ INJUSTIFICADA TAL DECISIÓN CONSTITUYE, POR SÍ, UNA FORMA DE REPARACIÓN.	I.1o.A.95 A (10a.)	1840
SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA.	I.1o.A.94 A (10a.)	1842
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO.	I.1o.A. J/6 (10a.)	1620
SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL.	I.6o.T. J/21 (10a.)	1628
SENTENCIAS DE AMPARO. LOS EFECTOS DE LAS QUE SE DICTAN EN LOS JUICIOS QUE DECIDEN SOBRE DERECHOS O INTERESES SUPRAINDIVIDUALES O INDIVISIBLES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE EXTIENDEN A TODOS LOS MIEMBROS DE ESE COLECTIVO.	I.1o.A.E.50 A (10a.)	1843

	Número de identificación	Pág.
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.	2a. XV/2015 (10a.)	841
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a. XIV/2015 (10a.)	842
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI UN JUEZ DE GARANTÍA, EN AUXILIO DEL QUE SIGUE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL QUEJOSO SEÑALA A AMBOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, PROCEDE DECRETAR AQUÉL POR LO QUE HACE A QUIEN ACTUÓ EN AUXILIO, SIN NECESIDAD DE OTORGARLE LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN TANTO QUE DICHO SOBRESEIMIENTO NO LE CAUSA PERJUICIO.	XVII.2o.P.A.13 P (10a.)	1843
SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INCORRECTO DECRETARLO POR NEGATIVA DE ACTOS, AL NO CONSTITUIR ÉSTA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.	I.3o.P.2 K (10a.)	1844
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. SÓLO PROCEDE APLICARLA CUANDO LE BENEFICIE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).	P. VI/2015 (10a.)	161

	Número de identificación	Pág.
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO.	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
SUSPENSIÓN. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ DIRIGIDA AL JUEZ CONSTITUCIONAL Y NO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.	I.3o.C.76 K (10a.)	1845
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PUEDE DECRETARLA Y COMO COMPLEMENTO EL SOMETIMIENTO A UN PROCESO TERAPÉUTICO (PADRES E HIJOS) A FIN DE RELACIONARSE ADECUADAMENTE, SIN QUE ELLO CAUSE UN PERJUICIO IRREPARABLE AL PROGENITOR, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ LA MEDIDA.	I.3o.C.163 C (10a.)	1846
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).	XVII.1o.P.A.16 P (10a.)	1847
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE DETERMINADOS CONCESIONARIOS UTILICEN UN FORMATO SIMPLIFICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, NO EXCEDE LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA.	I.1o.A.E.39 A (10a.)	1849

	Número de identificación	Pág.
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, AL DIVIDIR LA CONTABILIDAD EN MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (LEGISLACIÓN ABROGADA).	I.1o.A.E.41 A (10a.)	1850
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA).	I.1o.A.E.38 A (10a.)	1850
TELECOMUNICACIONES. LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA NO ESTABA OBLIGADA A ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, CON BASE EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD QUE LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS UTILIZAN HABITUALMENTE PARA EFECTOS DISTINTOS.	I.1o.A.E.40 A (10a.)	1851
TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA SATELITAL Y TERRENAL TIENEN LA CALIDAD DE TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE CONTROVIERTAN LOS LINEAMIENTOS DE *MUST CARRY* Y *MUST OFFER*.	I.1o.A.E.51 A (10a.)	1852
TELECOMUNICACIONES. NATURALEZA DE LA SEPARACIÓN CONTABLE O CONTABILIDAD SEPARADA POR SERVICIO Y SU ALCANCE CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA.	I.1o.A.E.37 A (10a.)	1853
TEORÍA DE LA ASUNCIÓN JUDICIAL. SUS POSTULADOS SE CUMPLEN CUANDO UN TRIBUNAL		

	Número de identificación	Pág.
COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL REPARA LA TRANSGRESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE OCASIONÓ ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL Y CON ELLO EVITA UNA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN EL PLANO INTERNACIONAL.	XI.1o.A.T.19 K (10a.)	1854
TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA.	I.3o.C.84 K (10a.)	1854
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO.	I.3o.C.74 K (10a.)	1855
TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESPONDE ACREDITARLA A ÉSTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 67/2010).	I.3o.T.28 L (10a.)	1857

	Número de identificación	Pág.
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVARSE CUANDO EL ACTOR RECLAMA EL RECONOCIMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE Y LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO SE SUSTENTA EN QUE LA RELACIÓN FUE DE CARÁCTER CIVIL.	I.3o.T.27 L (10a.)	1858
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN CUYAS FUNCIONES SEAN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, DEBEN SER CONSIDERADOS CON AQUEL CARÁCTER.	I.6o.T.127 L (10a.)	1860
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. DE LOS HECHOS NARRADOS EN SU DEMANDA PUEDE DERIVARSE LA PRESUNCIÓN DE QUE SU TRABAJO ES POR OBRA DETERMINADA.	VI.1o.T.5 L (10a.)	1861
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 6/2015 (10a.)	95
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA		

	Número de identificación	Pág.
RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.	I.1o.A. J/7 (10a.)	1641
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES.	I.1o.A. J/8 (10a.)	1642
VIOLACIONES DE FONDO. AUNQUE ÉSTAS RESULTARAN FUNDADAS Y GENERARAN UN MAYOR BENEFICIO, CUANDO LA RESPONSABLE INCURRA EN UNA VIOLACIÓN FORMAL AL NO ESTUDIAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL DEMANDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, A FIN DE DEPURAR LOS TEMAS QUE DEBAN QUEDAR FIRMES Y LOGRAR UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL EVITAR UNA MULTIPLICIDAD DE AMPAROS, DEBE OCUPARSE DEL ANÁLISIS DE AMBAS INFRACCIONES.	I.3o.C.78 K (10a.)	1865
VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE POR CUANTO VE A LA ACCIÓN PRINCIPAL LAS HACE VALER EN AMPARO DIRECTO, LA TRASCENDENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN DEBE ACOTARSE ÚNICAMENTE A LA PARTE DEL FALLO QUE NO LE RESULTÓ BENÉFICO.	(IX Región)1o.5 K (10a.)	1865
VIOLACIONES PROCESALES. ORDEN EN QUE DEBEN PLANTEARSE PARA SU ESTUDIO EN EL AMPARO DIRECTO.	I.3o.C.83 K (10a.)	1866
VIOLENCIA FAMILIAR. AL ELEMENTO NORMATIVO DE ESTE DELITO, RELACIONADO CON LA REFERENCIA ESPACIAL, CONSISTENTE EN QUE LA		

	Número de identificación	Pág.
CONDUCTA SE DESPLIEGUE "DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO O LUGAR QUE HABITE" DEBE DÁRSELE UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.P.79 P (10a.)	1867
VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DEBE IDENTIFICARSE ANTES DE ENTRAR AL DOMICILIO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE ÉSTE.	II.3o.A.195 A (10a.)	1868
VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.2o.C. J/16 (10a.)	1651

Índice de Ejecutorias

	Instancia	Pág.
Contradicción de tesis 360/2013.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativa a la tesis P./J. 1/2015 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 16, Tomo I, marzo de 2015, página 117.	P.	9
Amparo directo en revisión 3113/2014.—Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Relativo a la tesis 1a./J. 29/2015 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.".....	1a.	227
Amparo directo 49/2012.—Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Relativo a las tesis 1a./J. 20/2015 (10a.), 1a./J. 23/2015 (10a.), 1a./J. 19/2015 (10a.), 1a./J. 18/2015 (10a.), 1a./J. 15/2015 (10a.), 1a./J. 21/2015 (10a.), 1a./J. 17/2015 (10a.), 1a./J. 22/2015 (10a.) y 1a./J. 16/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INO-		

Instancia Pág.

CENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.", "EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.", "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE.", "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA.", "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA PUEDE SER ACREDITADA POR EL AFECTADO CON LOS ELEMENTOS DE PRUEBA O INDICIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE, RAZONABLEMENTE, CONDUZCAN AL JUZGADOR A LA CONVICCIÓN DE QUE SU ORIGEN ES LEGAL.", "EXTINCIÓN DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, LA ACCIÓN RELATIVA ESTÁ SUJETA A QUE EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL EMITA ALGUNA DECISIÓN EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL." y "EXTINCIÓN DE DOMINIO. RELEVANCIA DE LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA." 1a. 242

Amparo directo 22/2013.—Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Relativo a la tesis 1a./J. 14/2015 (10a.), de título y subtítulo: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA." 1a. 348

Contradicción de tesis 130/2014.—Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito.—Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

	Instancia	Pág.
Relativa a las tesis 1a./J. 8/2015 (10a.) y 1a./J. 7/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)." y "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."	1a.	425
Contradicción de tesis 22/2014.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.—Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Relativa al tema: "Contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito. Si alguna de las tesis contendientes se aparta del sentido y alcance de la ejecutoria de la cual deriva, procede ordenar su aclaración, a efecto de no generar un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica en el gobernado y los órganos jurisdiccionales."	1a.	485
Amparo en revisión 256/2014.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativo a las tesis 2a./J. 26/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD." y "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD."	2a.	597
Contradicción de tesis 94/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativa a la tesis 2a./J. 17/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y		

	Instancia	Pág.
ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)."	2a.	643

Contradicción de tesis 249/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, Noveno, Décimo Primero y Décimo Segundo, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila y el entonces Cuarto de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.—Ministro Ponente: Juan N. Silva Meza. Relativa a la tesis 2a./J. 20/2015 (10a.), de título y subtítulo: "FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL 'DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997', DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012."

	2a.	701

Contradicción de tesis 177/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativa a la tesis 2a./J. 19/2015 (10a.), de título y subtítulo: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

	2a.	762

	Instancia	Pág.
Contradicción de tesis 301/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Cuarto del Décimo Octavo Circuito.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativa a la tesis 2a./J. 25/2015 (10a.), de título y subtítulo: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO."	2a.	786
Contradicción de tesis 3/2013.—Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.—Magistrado Ponente: Federico Rodríguez Celis. Relativa a las tesis PC.V. J/1 A (10a.) y PC.V. J/2 A (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS." y "PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO."	PC.	897
Contradicción de tesis 1/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.—Magistrado Ponente: Francisco Domínguez Castelo. Relativa a la tesis PC.V. J/3 A (10a.), de título y subtítulo: "ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X –PRIMERA PARTE–, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN."	PC.	952

	Instancia	Pág.
Contradicción de tesis 13/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Relativa a las tesis PC.IV.A. J/12 A (10a.) y PC.IV.A. J/11 A (10a.), de títulos y subtítulos: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN." y "SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN".....	PC.	1015
Contradicción de tesis 5/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito.—Magistrado Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Relativa a la tesis PC.XXX. J/11 C (10a.), de título y subtítulo: "COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.".....	PC.	1089
Contradicción de tesis 1/2014.—Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Tercer Circuito.—Magistrado Ponente: Rodolfo Alberto Bandala Ávila. Relativa a la tesis PC.XIII. J/2 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN 'SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES', AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.".....	PC.	1123

Instancia Pág.

Contradicción de tesis 11/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Relativa a las tesis PC.IV.A. J/8 A (10a.) y PC.IV.A. J/9 A (10a.), de títulos y subtítulos: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA." ..... PC. 1162

Contradicción de tesis 4/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito.—Magistrada Ponente: Lucila Castelán Rueda. Relativa a la tesis PC.XXX. J/12 A (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA."..... PC. 1264

Amparo en revisión 104/2014.—Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Relativo a la tesis XXVII.3o. J/26 (10a.), de título y subtítulo: "CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."..... T.C. 1351

Amparo directo 565/2014.—Magistrado Ponente: Rafael Martín Ocampo Pizano. Relativo a las tesis XXVII.1o.1 A (10a.) y XXVII.1o. J/1 (10a.),

	Instancia	Pág.
de títulos y subtítulos: "DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA." y "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA."	T.C.	1374
Amparo en revisión 143/2014.—Magistrado Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Relativo a la tesis XXVII.3o. J/14 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN."	T.C.	1428
Amparo directo 614/2011.—Magistrado Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Relativo a la tesis I.3o.C. J/11 (10a.), de título y subtítulo: "DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE."	T.C.	1453
Incidente de suspensión (revisión) 11/2015.—Magistrada Ponente: Ma. del Refugio González Tamayo. Relativo a la tesis I.8o.C. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO."	T.C.	1488
Amparo en revisión 208/2014.—Magistrado Ponente: Luis García Sedas. Relativo a la tesis VII.1o.A. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. EN CASO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTUDIE LA CAUSA ADUCIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES AL SOBRESEER POR UN MOTIVO DISTINTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA ESA		

	Instancia	Pág.
DETERMINACIÓN, PUEDE ACOGER AQUÉLLA SIN NECESIDAD DE DAR VISTA PREVIAMENTE AL RECURRENTE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	T.C.	1499
Amparo directo 202/2014.—Magistrada Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Relativo a la tesis XVII.1o.P.A. J/6 (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	T.C.	1506
Amparo en revisión 247/2014.—Magistrado Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Relativo a la tesis XVI.1o.A. J/19 (10a.), de título y subtítulo: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	T.C.	1529
Amparo directo 731/2014.—Magistrado Ponente: Genaro Rivera. Relativo a la tesis I.6o.T. J/22 (10a.), de título y subtítulo: "RELACIÓN DE TRABAJO. CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE SU NEGATIVA."	T.C.	1537
Amparo directo 390/2014.—Magistrado Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Relativo a la tesis I.7o.P. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE."	T.C.	1572

	Instancia	Pág.
Amparo directo 884/2014.—Beatriz Cruz Rodríguez.—Magistrado Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Relativo a la tesis I.1o.A. J/6 (10a.), de título y subtítulo: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO."	T.C.	1591
Amparo directo 1254/2014.—Magistrado Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Relativo a la tesis I.6o.T. J/21 (10a.), de título y subtítulo: "SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL."	T.C.	1621
Amparo en revisión 2/2015.—Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal.—Magistrado Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Relativo a las tesis I.1o.A. J/7 (10a.) y I.1o.A. J/8 (10a.), de títulos y subtítulos: "VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA." y "VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES."	T.C.	1629
Amparo en revisión 6/2015.—Magistrada Ponente: Ma. Elisa Tejeda Hernández. Relativo a la tesis VI.2o.C. J/16 (10a.), de título y subtítulo: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	T.C.	1643
Amparo en revisión 216/2014.—Magistrado Ponente: Jorge Arturo Sánchez Jiménez. Relativo a la tesis II.1o.18 P (10a.), de título y		

Instancia Pág.

subtítulo: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]." ..... T.C. 1672

Amparo directo 1364/2014.—Magistrado Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Relativo a la tesis I.13o.T.117 L (10a.), de título y subtítulo: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI EL TRABAJADOR PRECISA UN SALARIO QUE EL PATRÓN ACEPTA Y OFRECE EN SU CONTESTACIÓN, PERO DE AUTOS QUEDA DEMOSTRADO QUE AQUÉL PERCIBÍA CIERTA REMUNERACIÓN ADICIONAL EN FORMA ORDINARIA." ..... T.C. 1751

Amparo directo 1137/2014.—Magistrado Ponente: Héctor Landa Razo. Relativo a la tesis I.13o.T.119 L (10a.), de título y subtítulo: "PREFERENCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. A EFECTO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTORIO DE LA ACCIÓN, ES INSUFICIENTE ACREDITAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE QUIEN SE LE ASIGNÓ EL PUESTO DEMANDADO."..... T.C. 1772

Amparo directo 1181/2014.—Magistrado Ponente: Héctor Landa Razo. Relativo a la tesis I.13o.T.118 L (10a.), de título y subtítulo: "PRÓRROGA DEL CONTRATO LABORAL. SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE MANERA SUBSIDIARIA A LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO." .... T.C. 1789

Índice de Votos Particulares y Minoritarios

Pág.

Ministro José Fernando Franco González Salas.—Acción de inconstitucionalidad 2/2014.—Procurador General de la República. Relativo a la ejecutoria de tema: "Delitos contra la salud. El artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2013, en la porción normativa que remite a la fracción IV del numeral 245 del mismo ordenamiento, que contiene el listado de sustancias psicotrópicas para sancionar al que las venda o suministre a menores de edad o incapaces, viola los principios de seguridad jurídica, taxatividad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica, así como el derecho a la salud." 214

Ministro José Ramón Cossío Díaz.—Acción de inconstitucionalidad 2/2014.—Procurador General de la República. Relativo a la ejecutoria de tema: "Delitos contra la salud. El artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2013, en la porción normativa que remite a la fracción IV del numeral 245 del mismo ordenamiento, que contiene el listado de sustancias psicotrópicas para sancionar al que las venda o suministre a menores de edad o incapaces, viola los principios de seguridad jurídica, taxatividad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica, así como el derecho a la salud." 221

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Amparo directo 22/2013. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis 1a./J. 14/2015 (10a.), de título y subtítulo: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA." 422

Pág.

Magistrado Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz.—Contradicción de tesis 3/2013.—Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.V. J/1 A (10a.) y PC.V. J/2 A (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS." y "PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO." 947

Magistrado Hugo Gómez Ávila.—Contradicción de tesis 3/2013.—Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.V. J/1 A (10a.) y PC.V. J/2 A (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS." y "PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO." 949

Magistrada Lucila Castelán Rueda.—Contradicción de tesis 5/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XXX. J/11 C (10a.), de título y subtítulo: "COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Pág.

ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES." 1112

Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez.—Contradicción de tesis 5/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XXX. J/11 C (10a.), de título y subtítulo: "COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES." 1118

Magistrada María de Fátima Isabel Sámano Hernández.—Contradicción de tesis 1/2014.—Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Tercer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XIII. J/2 A (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN 'SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES', AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA." 1151

Magistrado Luis Alfonso Hernández Núñez.—Contradicción de tesis 11/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.IV.A. J/8 A (10a.) y PC.IV.A. J/9 A (10a.), de títulos y subtítulos: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA." 1260

Pág.

Magistrado Esteban Álvarez Troncoso.—Contradicción de tesis 4/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XXX. J/12 A (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS. LA SOLICITUD DE SU OTORGAMIENTO CUANDO LOS REQUISITOS RELATIVOS SE CUMPLIERON, UNOS, CONFORME A LA ABROGADA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y OTROS, DE ACUERDO CON LA NUEVA LEY DEL PROPIO INSTITUTO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2007, DEBE SER RESUELTA CONFORME A ESTA ÚLTIMA." 1325

Magistrado Miguel Ángel Alvarado Servín.—Contradicción de tesis 4/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XXX. J/12 A (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS. LA SOLICITUD DE SU OTORGAMIENTO CUANDO LOS REQUISITOS RELATIVOS SE CUMPLIERON, UNOS, CONFORME A LA ABROGADA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y OTROS, DE ACUERDO CON LA NUEVA LEY DEL PROPIO INSTITUTO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2007, DEBE SER RESUELTA CONFORME A ESTA ÚLTIMA." 1335

Magistrado Silverio Rodríguez Carrillo.—Contradicción de tesis 4/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XXX. J/12 A (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIOS. LA SOLICITUD DE SU OTORGAMIENTO CUANDO LOS REQUISITOS RELATIVOS SE CUMPLIERON, UNOS, CONFORME A LA ABROGADA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y OTROS, DE ACUERDO CON LA NUEVA LEY DEL PROPIO INSTITUTO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2007, DEBE SER RESUELTA CONFORME A ESTA ÚLTIMA." 1341

Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías.—Amparo en revisión 216/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis

Pág.

II.1o.18 P (10a.), de título y subtítulo: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]." 1687

Magistrado Héctor Landa Razo.—Amparo directo 1364/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis I.13o.T.117 L (10a.), de título y subtítulo: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI EL TRABAJADOR PRECISA UN SALARIO QUE EL PATRÓN ACEPTA Y OFRECE EN SU CONTESTACIÓN, PERO DE AUTOS QUEDA DEMOSTRADO QUE AQUÉL PERCIBÍA CIERTA REMUNERACIÓN ADICIONAL EN FORMA ORDINARIA." 1759

Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos.—Amparo directo 1137/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis I.13o.T.119 L (10a.), de título y subtítulo: "PREFERENCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. A EFECTO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTORIO DE LA ACCIÓN, ES INSUFICIENTE ACREDITAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE QUIEN SE LE ASIGNÓ EL PUESTO DEMANDADO." 1785

Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos.—Amparo directo 1181/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis I.13o.T.118 L (10a.), de título y subtítulo: "PRÓRROGA DEL CONTRATO LABORAL. SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE MANERA SUBSIDIARIA A LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO." 1810

Índice de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales

Controversia constitucional 34/2012.—Poder Judicial del Estado de Jalisco.—Ministro Ponente: Luis María Aguilar Morales. Relativa a los temas: "Afirmativa ficta. El artículo 108-Bis, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, adicionado mediante Decreto Número 23965/LIX/12, publicado el 31 de marzo de 2012 en el Periódico Oficial de esa entidad, y corregido por la fe de erratas identificada con el Número DPL-845-LIX, publicada en dicho medio de difusión el 10 de mayo de 2012, en la porción normativa que prevé: 'El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, deberá presentar la solicitud de declaratoria ante cualquier Sala del Poder Judicial que conozca de la materia civil o mercantil…', no vulnera el principio de división de Poderes, en tanto que debe interpretarse en el sentido de que no se refiere a que el gobernador decida la Sala que ha de conocer de la solicitud respectiva, sino más bien que cualquiera de las Salas del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco que conozcan de dichas materias es competente para resolver las solicitudes de afirmativa ficta, conforme a los mecanismos de distribución de asuntos que rijan en ese órgano jurisdiccional.", "Poder Judicial del Estado de Jalisco. Debe declararse la invalidez de la fe de erratas relativa al Decreto Número 23965/LIX/12, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 31 de marzo de 2012, identificada con el Número DPL-869-LIX, publicada en ese medio de difusión el 5 de junio de 2012, únicamente por lo que hace a la fracción II del artículo 101 de la ley orgánica relativa,

	Instancia	Pág.
en tanto que a través de ella se realizaron modificaciones al contenido normativo de la citada fracción que no corresponden a la voluntad del legislador expresada al discutir y aprobar el dictamen sometido a su consideración.", "Poder Judicial del Estado de Jalisco. El artículo 101, fracción II, de la ley orgánica relativa, reformado mediante Decreto Número 23965/LIX/12, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 31 de marzo de 2012, en relación con su párrafo primero, cuyo texto fue corregido por la fe de erratas respectiva a ese decreto, identificada con el Número DPL-869-LIX, publicada en dicho medio de difusión el 5 de junio de 2012, al prever que los juzgados del ramo civil locales conocerán de las demandas de afirmativa ficta para actos de enajenación de bienes inmuebles propiedad del Estado, así como de toda clase de juicios o trámites que determine el consejo general dentro de sus facultades, es válido." y "Poder Judicial del Estado de Jalisco. Los artículos 48 de la ley orgánica relativa, reformado mediante Decreto Número 23965/LIX/12, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 31 de marzo de 2012 y 108-Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, adicionado por ese decreto, ambos corregidos por las fe de erratas identificadas con los Números DPL-869-LIX y DPL-845-LIX, publicadas en dicho medio de difusión el 5 de junio y 10 de mayo de 2012, respectivamente, en las porciones normativas que prevén 'Las Salas que conozcan de la materia civil y mercantil…' y '…las Salas del Poder Judicial del Estado que conozcan de la materia civil y mercantil…', correlativamente, no generan incertidumbre, en tanto que debe entenderse que se refieren a las Salas del Supremo Tribunal de Justicia Local."	P.	99

Acción de inconstitucionalidad 2/2014.—Procurador General de la República.—Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Relativa al tema: "Delitos contra la salud. El artículo 467 Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2013, en la porción normativa que remite a

	Instancia	Pág.
la fracción IV del numeral 245 del mismo ordenamiento, que contiene el listado de sustancias psicotrópicas para sancionar al que las venda o suministre a menores de edad o incapaces, viola los principios de seguridad jurídica, taxatividad, proporcionalidad y razonabilidad jurídica, así como el derecho a la salud."	P.	163
Controversia constitucional 74/2014.—Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.—Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Relativa a los temas: "Controversia constitucional. Debe sobreseerse en el juicio respecto de normas generales cuya constitucionalidad no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación y la impugnación resulte notoriamente extemporánea en razón de la fecha de su publicación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." y "Libre administración hacendaria y autonomía de los Ayuntamientos en la gestión de sus recursos. El Decreto Número Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro, publicado el 9 de julio de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, mediante el cual el Poder Legislativo Local determinó conceder pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al gasto público del Municipio de Cuernavaca, a un empleado de ese Ayuntamiento, viola el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."	1a.	519
Controversia constitucional 98/2013.—Poder Legislativo del Estado de Baja California.—Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Relativa a los temas: "Controversia constitucional. Si los actos impugnados constituyen actos futuros e inciertos cuya existencia no se acredita en autos, debe sobreseerse en el juicio, en términos del artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados		

	Instancia	Pág.
Unidos Mexicanos.", "Derecho de veto. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California está facultado para ejercerlo respecto del Decreto 490 de la Vigésima Legislatura Local mediante el cual se crea el Municipio Libre de San Quintín, en términos de los artículos 34 de la Constitución Política de la entidad, y 163 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal." y "Derecho de veto. La formulación de observaciones por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al Decreto 490 de la Vigésima Legislatura Local mediante el cual se crea el Municipio Libre de San Quintín, no vulnera el principio de división de Poderes."	1a.	556
Controversia constitucional 81/2014.—Municipio de Jantetelco, Estado de Morelos.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativa a los temas: "Controversia constitucional. Debe sobreseerse en el juicio respecto de actos concretos cuya constitucionalidad no se reclame dentro del plazo de treinta días a que se refiere el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, del mismo ordenamiento." y "Participaciones federales y Fondo de Fomento Municipal. El descuento realizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos al Ayuntamiento de Jantetelco en junio de 2014 por aquellos conceptos, para cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del adelanto de recursos recibidos, no vulnera los principios de integridad de los recursos económicos municipales y de libre administración hacendaria."	2a.	845

Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pág.

Acuerdo General Número 7/2015, de veinte de abril de dos mil quince, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se dispone el aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el problema de constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece; y se ordena a los Juzgados de Distrito el envío directo de dichos asuntos a este Alto Tribunal. 1875

Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes del Consejo de la Judicatura Federal

Pág.

Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al otorgamiento de la Distinción al Mérito Judicial "Ignacio L. Vallarta", correspondiente al año dos mil trece..... 1883

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo..... 1887

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales..... 1889

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo..... 1893

Acuerdo General 15/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de la sede referida..... 1895

Acuerdo General 16/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 7 y 9, fracciones I y II, del diverso

Pág.

Acuerdo General 48/2013, que constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal. 1901

Acuerdo General 17/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 23/2011, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito antes referidos. 1904

Acuerdo General 20/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Cuarto Tribunal Unitario de Circuito y Juzgado Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. 1909

Acuerdo CCNO/8/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros. 1915

Acuerdo CCNO/9/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Juzgados Primero a Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. ... 1920

Acuerdo CCNO/10/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. 1923

Los índices en Materia Constitucional, en Materia Penal, en Materia Administrativa, en Materia Civil, en Materia Laboral, en Materia Común, de Jurisprudencia por Contradicción, de Ordenamientos, así como la Tabla General Temática de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas correspondientes a las tesis publicadas en esta *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación* son consultables en la Gaceta Electrónica.

OCTAVA PARTE

SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CUYA PUBLICACIÓN NO ES OBLIGATORIA
Y LOS VOTOS RESPECTIVOS

NOVENA PARTE

SENTENCIAS RELEVANTES DICTADAS POR OTROS TRIBUNALES, PREVIO ACUERDO DEL PLENO O DE ALGUNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DÉCIMA PARTE
OTROS ÍNDICES

Índice en Materia Constitucional

	Número de identificación	Pág.
ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES.	I.1o.A.E.48 A (10a.)	1655
AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA [ABANDONO DE LAS TESIS 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) Y 2a. LXXVI/2014 (10a.) (*)].	2a. XXII/2015 (10a.)	833
ARRAIGO. EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 4 DE ENERO DE 2012, QUE PERMITÍA DECRETARLO CONTRA EL INDICIADO, SIN ESPECIFICAR RESPECTO DE QUÉ DELITOS, VULNERA EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	VI.2o.P.21 P (10a.)	1665
ARRENDAMIENTO. EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE RENTAS, NO PUEDEN CONSIDERARSE USURARIOS SI NO REBASAN LA SUERTE PRINCIPAL.	I.3o.C.170 C (10a.)	1666

	Número de identificación	Pág.
COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	2a. XVI/2015 (10a.)	834
CONSTITUCIÓN. SU CONCEPCIÓN COMO NORMA JURÍDICA.	1a. CXXXV/2015 (10a.)	485
CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).	2a./J. 17/2015 (10a.)	699
CULPABILIDAD. LA PONDERACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SENTENCIADO PARA DISTINGUIR "EL BIEN DEL MAL" COMO UN ASPECTO PARA DETERMINAR SU GRADO, ES UNA PRÁCTICA CONTRARIA AL PARADIGMA DEL DERECHO PENAL DE ACTO.	VI.2o.P.24 P (10a.)	1712

	Número de identificación	Pág.
DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	XXVII.1o.1 A (10a.)	1717
DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.	1a./J. 29/2015 (10a.)	240
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN.	XXVII.3o. J/14 (10a.)	1451

	Número de identificación	Pág.
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.	2a./J. 26/2015 (10a.)	640
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD.	2a./J. 27/2015 (10a.)	641
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	1a./J. 20/2015 (10a.)	330
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES CONSTITUCIONAL.	1a. CXXIX/2015 (10a.)	504
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXX/2015 (10a.)	505
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.	1a./J. 23/2015 (10a.)	331
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO B, DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL "OCULTAMIENTO".	1a. CXXXI/2015 (10a.)	510
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A		

	Número de identificación	Pág.
LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE.	1a./J. 18/2015 (10a.)	335
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.	1a./J. 14/2015 (10a.)	422
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA.	1a./J. 21/2015 (10a.)	340
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXVIII/2015 (10a.)	513
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXXVII/2015 (10a.)	514
FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA PUEDE REALIZARSE DENTRO DE LAS CUARENTA		

	Número de identificación	Pág.
Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO.	VII.4o.P.T.16 P (10a.)	1728
FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	I.1o.A.5 CS (10a.)	1729
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SUS ATRIBUCIONES, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL, SON TAMBIÉN DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO.	XI.1o.A.T.46 A (10a.)	1731
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ESTÁ OBLIGADO A RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE INTERCONEXIÓN INICIADOS A INSTANCIA DE PARTE.	I.1o.A.E.49 A (10a.)	1735
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NO DEBE INTERPRETARSE AL GRADO DE TENER POR ACREDITADO UN DELITO QUE NO SATISFACE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL RESPECTIVO.	I.9o.P.76 P (10a.)	1737
INTERESES USURARIOS. EL ELEMENTO NOTORIEDAD RESULTA INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN OFICIOSA DE LOS PACTADOS.	I.3o.C.189 C (10a.)	1738
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS.	1a. CXXXIII/2015 (10a.)	516

	Número de identificación	Pág.
MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN.	XI.1o.A.T.18 K (10a.)	1745
PERSONAS INDÍGENAS. ES INNECESARIO ATENDER A SUS COSTUMBRES, CUANDO SON PARTE EN UN JUICIO QUE INVOLUCRA UN INMUEBLE RESPECTO DEL CUAL PUEDEN EJERCER SUS PRÁCTICAS RESPECTO A LA PROPIEDAD, Y ÉSTE ESTÁ UBICADO FUERA DEL TERRITORIO DE SU COMUNIDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.C.219 C (10a.)	1768
POSESIÓN DE UNIFORMES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FALSIFICADOS. EL ARTÍCULO 250 BIS 1, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ DICHO DELITO NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.	I.9o.P.78 P (10a.)	1771
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU IMPACTO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE UNA DEFENSA ADECUADA Y EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA EN MATERIA PENAL.	1a. CXXXVI/2015 (10a.)	516
PRINCIPIO PRO PERSONA. ÚNICAMENTE ES APLICABLE PARA INTERPRETAR LA NORMA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y NO PARA INSTAURAR UN CRITERIO SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.	(IV Región)2o.1 CS (10a.)	1788
RADIODIFUSIÓN. FINALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR		

	Número de identificación	Pág.
LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS RELACIONADAS CON CONTENIDOS.	I.1o.A.E.46 A (10a.)	1819
RADIODIFUSIÓN. LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS, NO AFECTA LA LIBERTAD CONTRACTUAL DE QUIENES NO PERTENEZCAN A ÉSTE Y SE DEDIQUEN A LA REALIZACIÓN O PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS.	I.1o.A.E.47 A (10a.)	1820
RADIODIFUSIÓN. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU RESOLUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR, AL SER OBLIGATORIAS PARA LOS MIEMBROS DE ÉSTE, SUS CAUSAHABIENTES O CESIONARIOS DE SUS DERECHOS O QUIENES RESULTEN DE REESTRUCTURAS CORPORATIVAS O MODIFICACIONES ACCIONARIAS DERIVADAS DE CONCENTRACIONES DE CUALQUIER TIPO A AGENTES VINCULADOS CON ÉL, SON IDÓNEAS Y RAZONABLES PARA ALCANZAR LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PROPIA RESOLUCIÓN.	I.1o.A.E.45 A (10a.)	1820
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES. SU DERECHO DE SER OÍDOS PUEDE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA VIDEOLLAMADA, VÍA *SKYPE*, EN SALVAGUARDA DE SU INTERÉS SUPERIOR, CUANDO LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL LUGAR DEL JUICIO Y SU RESIDENCIA LE OCASIONE VIAJAR Y REALIZAR GASTOS.	I.3o.C.174 C (10a.)	1826

	Número de identificación	Pág.
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SÓLO CUANDO NO EXISTEN PRUEBAS DIRECTAS QUE SIRVAN DE PARÁMETRO PARA FIJAR SU MONTO, ES APLICABLE EL QUE DE FORMA SUBSIDIARIA ESTABLECE (EN DÍAS MULTA) EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.	II.2o.P.32 P (10a.)	1829
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE.	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE.	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92).	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE		

	Número de identificación	Pág.
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS.	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES.	2a. XVII/2015 (10a.)	839
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES SOSTENIDAS EN JUICIOS DE AMPARO RESUELTOS PREVIAMENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE RECONOCIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CUYA INVALIDEZ IMPUGNA EL RECURRENTE HASTA EL ESCRITO DE REVISIÓN, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO.	2a. XIX/2015 (10a.)	840
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EN CUANTO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO, PUEDE SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS NOTARIOS PÚBLICOS.	XI.1o.A.T.47 A (10a.)	1839
SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 37, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA		

	Número de identificación	Pág.
INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LABORAL NO VIOLA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (ORDENAMIENTO ABROGADO POR EL REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y APLICACIÓN DE SANCIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN VIGOR A LOS TRES MESES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN).	VI.1o.A.88 A (10a.)	1839
SEGURIDAD PÚBLICA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE ESE TIPO DE CORPORACIONES, ASÍ COMO DE SUPRIMIR LA INSCRIPCIÓN DE SU SEPARACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, SE DEBE CONSIDERAR QUE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ INJUSTIFICADA TAL DECISIÓN CONSTITUYE, POR SÍ, UNA FORMA DE REPARACIÓN.	I.1o.A.95 A (10a.)	1840
SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA.	I.1o.A.94 A (10a.)	1842
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO.	I.1o.A. J/6 (10a.)	1620
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL AR-		

	Número de identificación	Pág.
TÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.	2a. XV/2015 (10a.)	841
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a. XIV/2015 (10a.)	842
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PUEDE DECRETARLA Y COMO COMPLEMENTO EL SOMETIMIENTO A UN PROCESO TERAPÉUTICO (PADRES E HIJOS) A FIN DE RELACIONARSE ADECUADAMENTE, SIN QUE ELLO CAUSE UN PERJUICIO IRREPARABLE AL PROGENITOR, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ LA MEDIDA.	I.3o.C.163 C (10a.)	1846
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE DETERMINADOS CONCESIONARIOS UTILICEN UN FORMATO SIMPLIFICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, NO EXCEDE LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA.	I.1o.A.E.39 A (10a.)	1849
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, AL DIVIDIR LA CONTABILIDAD EN MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS, NO VIOLA		

	Número de identificación	Pág.
EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (LEGISLACIÓN ABROGADA).	I.1o.A.E.41 A (10a.)	1850
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA).	I.1o.A.E.38 A (10a.)	1850
TEORÍA DE LA ASUNCIÓN JUDICIAL. SUS POSTULADOS SE CUMPLEN CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL REPARA LA TRANSGRESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE OCASIONÓ ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL Y CON ELLO EVITA UNA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN EL PLANO INTERNACIONAL.	XI.1o.A.T.19 K (10a.)	1854
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES.	I.1o.A. J/8 (10a.)	1642
VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DEBE IDENTIFICARSE ANTES DE ENTRAR AL DOMICILIO, EN		

	Número de identificación	Pág.
ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE ÉSTE.	II.3o.A.195 A (10a.)	1868
VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.2o.C. J/16 (10a.)	1651

Índice en Materia Penal

	Número de identificación	Pág.
ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO "PADRASTRO" PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.	I.9o.P.75 P (10a.)	1655
ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. LOS CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES EMANADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, COMO LA ORDEN DE TRASLADO DEL SENTENCIADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO.	III.2o.P.75 P (10a.)	1657
AMPARO DIRECTO. NO ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO EN LA CAUSA DE ORIGEN CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, SI EL SENTENCIADO TAMBIÉN HIZO VALER ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN EL CUAL FUE ADMITIDO POR EL TRIBUNAL UNITARIO SEÑALADO POR AQUÉL COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.	III.2o.P.74 P (10a.)	1662
ARRAIGO. EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 4 DE ENERO DE 2012, QUE PERMITÍA DECRETARLO CONTRA EL INDICIADO,		

	Número de identificación	Pág.
SIN ESPECIFICAR RESPECTO DE QUÉ DELITOS, VULNERA EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	VI.2o.P.21 P (10a.)	1665
CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)].	II.1o.18 P (10a.)	1693
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DETERMINAR Y CALIFICAR EN DEFINITIVA UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.	I.3o.P.23 P (10a.)	1694
CULPABILIDAD. LA PONDERACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SENTENCIADO PARA DISTINGUIR "EL BIEN DEL MAL" COMO UN ASPECTO PARA DETERMINAR SU GRADO, ES UNA PRÁCTICA CONTRARIA AL PARADIGMA DEL DERECHO PENAL DE ACTO.	VI.2o.P.24 P (10a.)	1712
DELITO CONTRA LA SALUD. NO SE ACREDITA LA MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN EN SU HIPÓTESIS DE COMPRA AGRAVADA (POR ENCONTRARSE EL INCULPADO A MENOS DE TRESCIENTOS METROS DE UN CENTRO EDUCATIVO), SINO LA		

	Número de identificación	Pág.
DIVERSA DE POSESIÓN SIMPLE, SI QUIEN LO COMETIÓ ES FARMACODEPENDIENTE Y LA CANTIDAD QUE ADQUIRIÓ ES MENOR O IGUAL A LA PREVISTA EN LA TABLA DE ORIENTACIÓN DE DOSIS MÁXIMAS DE CONSUMO PERSONAL E INMEDIATO.	I.9o.P.77 P (10a.)	1716
ESCENA DEL CRIMEN. PARA LA VALORACIÓN DE VESTIGIOS QUE PUEDEN SER DE SANGRE, ES NECESARIO QUE SE ACREDITE TAL NATURALEZA MEDIANTE LOS POSTERIORES EXÁMENES DE LABORATORIO.	1a. CXXXIV/2015 (10a.)	503
EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	1a./J. 20/2015 (10a.)	330
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES CONSTITUCIONAL.	1a. CXXIX/2015 (10a.)	504
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXX/2015 (10a.)	505
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO.	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508

	Número de identificación	Pág.
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO.	1a./J. 23/2015 (10a.)	331
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY RESPECTIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, CUYA TRANSGRESIÓN PUEDA DAR LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O A DESESTIMAR LA PRETENSIÓN.	1a. CXXV/2015 (10a.)	510
EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.	1a./J. 19/2015 (10a.)	333
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO B, DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL "OCULTAMIENTO".	1a. CXXXI/2015 (10a.)	510
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA.	1a./J. 21/2015 (10a.)	340
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE ACTOS PREPARATORIOS DE LA ACCIÓN RESPECTIVA, CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).	1a. CXXXII/2015 (10a.)	512
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA PUEDE SER ACREDITADA POR EL AFECTADO CON LOS		

	Número de identificación	Pág.
ELEMENTOS DE PRUEBA O INDICIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE, RAZONABLEMENTE, CONDUZCAN AL JUZGADOR A LA CONVICCIÓN DE QUE SU ORIGEN ES LEGAL.	1a./J. 17/2015 (10a.)	342
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXVIII/2015 (10a.)	513
EXTINCIÓN DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, LA ACCIÓN RELATIVA ESTÁ SUJETA A QUE EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL EMITA ALGUNA DECISIÓN EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL.	1a./J. 22/2015 (10a.)	344
EXTINCIÓN DE DOMINIO. RELEVANCIA DE LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA.	1a./J. 16/2015 (10a.)	346
FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA PUEDE REALIZARSE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO.	VII.4o.P.T.16 P (10a.)	1728
INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NO DEBE INTERPRETARSE AL GRADO DE TENER POR ACREDITADO		

	Número de identificación	Pág.
UN DELITO QUE NO SATISFACE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL RESPECTIVO.	I.9o.P.76 P (10a.)	1737
MOTÍN. LA ACCIÓN TUMULTUARIA Y VIOLENTA DE UN GRUPO DE PERSONAS PARA IMPEDIR A LA AUTORIDAD POLICIACA LA EJECUCIÓN DE UN MANDATO DE AUTORIDAD NO CONFIGURA DICHO DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.1o.P.28 P (10a.)	1747
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.P.25 P (10a.)	1749
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NO ES SUSCEPTIBLE DE INVOCARSE COMO NOTORIA Y MANIFIESTA, Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE HASTA QUE AQUÉLLA SE ADMITE Y LA LITIS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA.	I.3o.P.26 P (10a.)	1750
ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO		

	Número de identificación	Pág.
DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA).	(V Región)5o.18 P (10a.)	1761
POSESIÓN DE UNIFORMES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FALSIFICADOS. EL ARTÍCULO 250 BIS 1, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ DICHO DELITO NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.	I.9o.P.78 P (10a.)	1771
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU IMPACTO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE UNA DEFENSA ADECUADA Y EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA EN MATERIA PENAL.	1a. CXXXVI/2015 (10a.)	516
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).	XVII.1o.P.A. J/6 (10a.)	1527
REDUCCIÓN DE LA PENA EN DELITOS GRAVES. EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROCEDE AUN CUANDO EL SUJETO ACTIVO HAYA CONFESADO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO EN VÍA DE PREPARATORIA, SIEMPRE QUE ÉSTA FUERE SU PRIMERA OPORTUNIDAD DE DECLARAR EN TORNO AL HECHO IMPUTADO.	I.5o.P.33 P (10a.)	1825
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SÓLO CUANDO NO EXISTEN PRUEBAS DIRECTAS QUE SIRVAN DE PARÁMETRO PARA FIJAR SU MONTO, ES APLICA-		

	Número de identificación	Pág.
BLE EL QUE DE FORMA SUBSIDIARIA ESTABLECE (EN DÍAS MULTA) EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.	II.2o.P.32 P (10a.)	1829
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE.	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE.	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI UN JUEZ DE GARANTÍA, EN AUXILIO DEL QUE SIGUE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL QUEJOSO SEÑALA A AMBOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, PROCEDE DECRETAR AQUÉL POR LO QUE HACE A QUIEN ACTUÓ EN AUXILIO, SIN NECESIDAD DE OTORGARLE LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN TANTO QUE DICHO SOBRESEIMIENTO NO LE CAUSA PERJUICIO.	XVII.2o.P.A.13 P (10a.)	1843
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INA-		

	Número de identificación	Pág.
PLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).	XVII.1o.P.A.16 P (10a.)	1847
TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
VIOLENCIA FAMILIAR. AL ELEMENTO NORMATIVO DE ESTE DELITO, RELACIONADO CON LA REFERENCIA ESPACIAL, CONSISTENTE EN QUE LA CONDUCTA SE DESPLIEGUE "DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO O LUGAR QUE HABITE" DEBE DÁRSELE UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.P.79 P (10a.)	1867

Índice en Materia Administrativa

	Número de identificación	Pág.
ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES.	I.1o.A.E.48 A (10a.)	1655
ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y OFICINAS FEDERALES DEL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y SE DELEGAN FACULTADES EN SUS TITULARES. SU ARTÍCULO 3 NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA PARTE CORRESPONDIENTE AL CITARSE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL.	VI.1o.A.87 A (10a.)	1660
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).	1a./J. 8/2015 (10a.)	478
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA DETERMINAR DERECHOS POR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SE CONFIGURA EN EL PLAZO DE CINCO		

	Número de identificación	Pág.
AÑOS, CONTADO A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ O DEBIÓ HABERSE PRESENTADO LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE SEA APLICABLE EL DE DIEZ, AL NO TRATARSE DE UNA CONTRIBUCIÓN CALCULADA POR EJERCICIOS.	I.1o.A.E.42 A (10a.)	1671
COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	2a. XVI/2015 (10a.)	834
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN.	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO O AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNE TOTAL O PARCIALMENTE UN RÉGIMEN FISCAL OPTATIVO, CUYA IMPLEMENTACIÓN OBEDECE A FINES EXTRAFISCALES.	2a. XIII/2015 (10a.)	835
CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO		

	Número de identificación	Pág.
CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	XXVII.1o.1 A (10a.)	1717
DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA		

	Número de identificación	Pág.
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.	2a./J. 26/2015 (10a.)	640
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD.	2a./J. 27/2015 (10a.)	641
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SUS ATRIBUCIONES, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL, SON TAMBIÉN DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO.	XI.1o.A.T.46 A (10a.)	1731
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ESTÁ OBLIGADO A RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE INTERCONEXIÓN INICIADOS A INSTANCIA DE PARTE.	I.1o.A.E.49 A (10a.)	1735
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.	PC.XIII. J/2 A (10a.)	1161
LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL		

	Número de identificación	Pág.
PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA.	PC.IV.A. J/9 A (10a.)	1262
PENSIONES. SU CUANTÍA DEBE SER PROPORCIONAL A LO QUE CUANTITATIVAMENTE APORTABA EL TRABAJADOR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN FUNCIÓN DE LO QUE REALMENTE SE LE DESCONTABA PARA EL FONDO RELATIVO Y DEL PORCENTAJE QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA LE CORRESPONDÍA PARA TAL FIN, CON INDEPENDENCIA DE LOS CONCEPTOS O DEL MONTO QUE COMO SUELDO BÁSICO DE COTIZACIÓN APAREZCA EN SU HOJA ÚNICA DE SERVICIOS.	I.2o.A.16 A (10a.)	1765
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA.	III.2o.A.62 A (10a.)	1770
PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
RADIODIFUSIÓN. FINALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS		

	Número de identificación	Pág.
ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS RELACIONADAS CON CONTENIDOS.	I.1o.A.E.46 A (10a.)	1819
RADIODIFUSIÓN. LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR Y LE IMPUSO MEDIDAS, NO AFECTA LA LIBERTAD CONTRACTUAL DE QUIENES NO PERTENEZCAN A ÉSTE Y SE DEDIQUEN A LA REALIZACIÓN O PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS.	I.1o.A.E.47 A (10a.)	1820
RADIODIFUSIÓN. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU RESOLUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN ESE SECTOR, AL SER OBLIGATORIAS PARA LOS MIEMBROS DE ÉSTE, SUS CAUSAHABIENTES O CESIONARIOS DE SUS DERECHOS O QUIENES RESULTEN DE REESTRUCTURAS CORPORATIVAS O MODIFICACIONES ACCIONARIAS DERIVADAS DE CONCENTRACIONES DE CUALQUIER TIPO A AGENTES VINCULADOS CON ÉL, SON IDÓNEAS Y RAZONABLES PARA ALCANZAR LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PROPIA RESOLUCIÓN.	I.1o.A.E.45 A (10a.)	1820
RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA.	XXVII.1o. J/1 (10a.)	1426
RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA		

	Número de identificación	Pág.
RESOLUCIÓN EN LA QUE EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DECRETA LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE UN ELEMENTO POR INCUMPLIR UN REQUISITO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN.	I.1o.A.96 A (10a.)	1824
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	2a./J. 19/2015 (10a.)	783
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS.	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO		

	Número de identificación	Pág.
SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES.	2a. XVII/2015 (10a.)	839
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTENTADOS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIONES II, PÁRRAFO PRIMERO, INCISO D), III, PÁRRAFO ÚLTIMO, IV, V Y VI, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA, DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA NOTIFICACIÓN AL CONGRESO LOCAL DE LA SENTENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE DECLARÓ LA INVALIDEZ DE DICHAS PORCIONES NORMATIVAS Y LA ENTRADA EN VIGOR DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE OCTUBRE DE 2012, DEBEN DECLARARSE NULOS.	III.1o.A.20 A (10a.)	1835
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL VICIO QUE ORIGINÓ LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO DEBE SER SUBSANADO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA COMO CONDICIÓN PARA EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO.	I.1o.A.98 A (10a.)	1836
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EN CUANTO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO, PUEDE SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A LOS NOTARIOS PÚBLICOS.	XI.1o.A.T.47 A (10a.)	1839
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS		

	Número de identificación	Pág.
ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN.	PC.IV.A. J/11 A (10a.)	1088
SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 37, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LABORAL NO VIOLA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (ORDENAMIENTO ABROGADO POR EL REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y APLICACIÓN DE SANCIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN VIGOR A LOS TRES MESES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN).	VI.1o.A.88 A (10a.)	1839
SEGURIDAD PÚBLICA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE ESE TIPO DE CORPORACIONES, ASÍ COMO DE SUPRIMIR LA INSCRIPCIÓN DE SU SEPARACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, SE DEBE CONSIDERAR QUE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ INJUSTIFICADA TAL DECISIÓN CONSTITUYE, POR SÍ, UNA FORMA DE REPARACIÓN.	I.1o.A.95 A (10a.)	1840
SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA.	I.1o.A.94 A (10a.)	1842
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN		

	Número de identificación	Pág.
DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO.	I.1o.A. J/6 (10a.)	1620
SENTENCIAS DE AMPARO. LOS EFECTOS DE LAS QUE SE DICTAN EN LOS JUICIOS QUE DECIDEN SOBRE DERECHOS O INTERESES SUPRAINDIVIDUALES O INDIVISIBLES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE EXTIENDEN A TODOS LOS MIEMBROS DE ESE COLECTIVO.	I.1o.A.E.50 A (10a.)	1843
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO.	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE DETERMINADOS CONCESIONARIOS UTILICEN UN FORMATO SIMPLIFICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, NO EXCEDE LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA.	I.1o.A.E.39 A (10a.)	1849
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, AL DIVIDIR LA CONTABILIDAD EN MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (LEGISLACIÓN ABROGADA).	I.1o.A.E.41 A (10a.)	1850

	Número de identificación	Pág.
TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA).	I.1o.A.E.38 A (10a.)	1850
TELECOMUNICACIONES. LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA NO ESTABA OBLIGADA A ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, CON BASE EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD QUE LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS UTILIZAN HABITUALMENTE PARA EFECTOS DISTINTOS.	I.1o.A.E.40 A (10a.)	1851
TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA SATELITAL Y TERRENAL TIENEN LA CALIDAD DE TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE CONTROVIERTAN LOS LINEAMIENTOS DE *MUST CARRY* Y *MUST OFFER*.	I.1o.A.E.51 A (10a.)	1852
TELECOMUNICACIONES. NATURALEZA DE LA SEPARACIÓN CONTABLE O CONTABILIDAD SEPARADA POR SERVICIO Y SU ALCANCE CONFORME A LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA.	I.1o.A.E.37 A (10a.)	1853
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.	I.1o.A. J/7 (10a.)	1641
VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DEBE IDENTIFICARSE ANTES DE ENTRAR AL DOMICILIO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE ÉSTE.	II.3o.A.195 A (10a.)	1868

Índice en Materia Civil

	Número de identificación	Pág.
ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU RESOLUCIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LO QUE SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE NUEVE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.2o.C.57 C (10a.)	1656
ACTUACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SON VÁLIDAS LAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD DECLARADA INCOMPETENTE POR DECLINATORIA Y, POR TANTO, LAS REALIZADAS POSTERIORMENTE, AL SER INDEPENDIENTES Y NO VERSE AFECTADAS DEBEN CONSERVARSE.	I.3o.C.218 C (10a.)	1657
ARRENDAMIENTO. EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE RENTAS, NO PUEDEN CONSIDERARSE USURARIOS SI NO REBASAN LA SUERTE PRINCIPAL.	I.3o.C.170 C (10a.)	1666
CONCURSO MERCANTIL. LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN RELATIVA DEBE ACOMPAÑARSE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO ANTE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA).	I.3o.C.180 C (10a.)	1700

	Número de identificación	Pág.
CONCURSO MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES LA SOLICITUD DE SU DECLARACIÓN, DEBE ACOMPAÑARSE DE UN DOCUMENTO PÚBLICO DONDE CONSTE LA MANIFESTACIÓN DE LOS SOCIOS PARA DECLARARSE EN MORA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VII, DE LA LEY RELATIVA).	I.3o.C.179 C (10a.)	1701
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA USO COMERCIAL. LAS PARTES PUEDEN ESTABLECER A QUIÉN CORRESPONDERÁ OBTENER LA LICENCIA DE USO DE SUELO, CUANDO LA LOCALIDAD ARRENDADA SE DESTINA A UN GIRO COMERCIAL DISTINTO AL PREVISTO EN AQUÉLLA.	I.3o.C.165 C (10a.)	1705
CONTRATO DE FIDEICOMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO.	I.3o.C.157 C (10a.)	1705
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. LA FALTA DE FIRMA COMO SIGNO NECESARIO DE LA EXPRESIÓN DE VOLUNTAD DE QUIEN DEBE OBLIGARSE AL PAGO, NO PUEDE SUBSANARSE CON PRUEBAS INDIRECTAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).	I.3o.C.177 C (10a.)	1706
COPROPIEDAD. NO EXISTE SI EL MATRIMONIO SE CELEBRA BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004).	I.3o.C.155 C (10a.)	1707

	Número de identificación	Pág.
COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.	I.3o.C.183 C (10a.)	1709
COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	PC.XXX. J/11 C (10a.)	1121
COSTAS EN JUICIOS DE DIVISIÓN DE COPROPIEDAD. SU CUANTIFICACIÓN DEBE ATENDER SÓLO AL VALOR DE LA PARTE ALÍCUOTA DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE EXCLUIR DE LO INDIVISO Y NO SOBRE SU TOTALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.1o.C.21 C (10a.)	1710
DERECHO A LA HABITACIÓN. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO COMO PARTE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PARA LOS MENORES DE EDAD.	I.3o.C.153 C (10a.)	1719
DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR LA APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HIJOS Y BIENES.	I.3o.C.171 C (10a.)	1721
DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE.	I.3o.C. J/11 (10a.)	1487

	Número de identificación	Pág.
EMBARGO JUDICIAL. EL JUEZ QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DE DONDE DERIVA ESE GRAVAMEN (JUICIO NATURAL), ES EL COMPETENTE PARA DETERMINAR EXPRESAMENTE SI PROCEDE O NO, POR CADUCIDAD, LA CANCELACIÓN O LA ANOTACIÓN REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL).	I.3o.C.186 C (10a.)	1723
EMBARGO JUDICIAL. SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3010, 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL).	I.3o.C.190 C (10a.)	1724
EMBARGOS. SI SE ORDENA SU CANCELACIÓN SOBRE LOS CONSTITUIDOS SOBRE UN INMUEBLE ADJUDICADO JUDICIALMENTE, SON INEFICACES EN TANTO NO PUEDEN RECAER EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, PUES ÉSTA NO ES CONSTITUTIVA DE DERECHOS.	VII.2o.C.90 C (10a.)	1725
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL CÓNYUGE QUE AFIRMA TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN, APOYADO EN LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE LO UNE CON EL DEMANDADO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERVENIR EN EL JUICIO RELATIVO, AUNQUE TAL RÉGIMEN PATRIMONIAL NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.	1a. CXXVI/2015 (10a.)	506
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA		

	Número de identificación	Pág.
EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY RESPECTIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, CUYA TRANSGRESIÓN PUEDA DAR LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O A DESESTIMAR LA PRETENSIÓN.	1a. CXXV/2015 (10a.)	510
EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA.	1a./J. 19/2015 (10a.)	333
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE.	1a./J. 18/2015 (10a.)	335
EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA PUEDE SER ACREDITADA POR EL AFECTADO CON LOS ELEMENTOS DE PRUEBA O INDICIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE, RAZONABLEMENTE, CONDUZCAN AL JUZGADOR A LA CONVICCIÓN DE QUE SU ORIGEN ES LEGAL.	1a./J. 17/2015 (10a.)	342
EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS		

	Número de identificación	Pág.
CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CXXXVII/2015 (10a.)	514
EXTINCIÓN DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, LA ACCIÓN RELATIVA ESTÁ SUJETA A QUE EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL EMITA ALGUNA DECISIÓN EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL.	1a./J. 22/2015 (10a.)	344
EXTINCIÓN DE DOMINIO. RELEVANCIA DE LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA.	1a./J. 16/2015 (10a.)	346
GUARDA Y CUSTODIA. SI EN LA CONTIENDA DE DIVORCIO SE ESTABLECIÓ QUE LA TENDRÍA LA MADRE Y A LA MUERTE DE ÉSTA LOS ABUELOS MATERNOS LA EJERCIERON DE HECHO Y EL PADRE, EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, PRETENDE RECUPERAR AQUÉLLA, DEBE HACERLO MEDIANTE JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.C.91 C (10a.)	1732
INTERESES USURARIOS. EL ELEMENTO NOTORIEDAD RESULTA INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN OFICIOSA DE LOS PACTADOS.	I.3o.C.189 C (10a.)	1738
JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. EL MERO ABANDONO DEL INMUEBLE ARRENDADO NO LO DEJA SIN MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	XXII.1o.5 C (10a.)	1742
JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. NO QUEDA SIN MATERIA POR LA MUERTE DEL ARRENDATARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	XXII.1o.4 C (10a.)	1742

	Número de identificación	Pág.
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA).	I.3o.C.160 C (10a.)	1746
PERSONAS INDÍGENAS. ES INNECESARIO ATENDER A SUS COSTUMBRES, CUANDO SON PARTE EN UN JUICIO QUE INVOLUCRA UN INMUEBLE RESPECTO DEL CUAL PUEDEN EJERCER SUS PRÁCTICAS RESPECTO A LA PROPIEDAD, Y ÉSTE ESTÁ UBICADO FUERA DEL TERRITORIO DE SU COMUNIDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.C.219 C (10a.)	1768
PRUEBA PERICIAL. LA VISTA QUE DEBE DARSE A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN Y FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ESTÁ IMPLÍCITA CON LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL ENJUICIADO Y AL CORRÉRSELE TRASLADO AL DEMANDADO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA, RESPECTIVAMENTE.	I.3o.C.154 C (10a.)	1813
PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE COMPROMETA A PRESENTARLOS.	XIX.1o.A.C.6 C (10a.)	1814
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES. SU DERECHO DE SER OÍDOS PUEDE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA VIDEOLLAMADA, VÍA *SKYPE*, EN SALVAGUARDA DE SU INTERÉS SUPERIOR, CUANDO LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL LUGAR DEL JUICIO Y SU RESIDENCIA LE OCASIONE VIAJAR Y REALIZAR GASTOS.	I.3o.C.174 C (10a.)	1826

	Número de identificación	Pág.
REMATE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA, POR SER AUTÓNOMA Y AJENA A LA COSA JUZGADA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [MODIFICACIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.13o.C.7 K (10a.)].	I.13o.C.16 C (10a.)	1827
RENTAS. SI EL DEUDOR NO OPONE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES RENTÍSTICAS, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZARLA OFICIOSAMENTE.	I.3o.C.176 C (10a.)	1828
RESCISIÓN DE CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA PROBARLA DEBE EXISTIR EL REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DOMICILIO DEL DEUDOR, SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2082 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).	**REPUBLICADA POR ACLARACIÓN** I.3o.C.690 C (9a.)	1832
RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92).	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PUEDE DECRETARLA Y COMO COMPLEMENTO EL SOMETIMIENTO A UN PROCESO TERAPÉUTICO (PADRES E HIJOS) A FIN DE RELACIONARSE ADECUADAMENTE, SIN QUE ELLO CAUSE UN PERJUICIO IRREPARABLE AL PROGENITOR, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ LA MEDIDA.	I.3o.C.163 C (10a.)	1846
VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL		

	Número de identificación	Pág.
QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.2o.C. J/16 (10a.)	1651

Índice en Materia Laboral

	Número de identificación	Pág.
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)].	(V Región)5o.20 L (10a.)	1663
ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X -PRIMERA PARTE-, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN.	PC.V. J/3 A (10a.)	1014
CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL LAUDO QUE LOS RESUELVE, PERMITE AL JUZGADOR EXAMINAR NO SÓLO LOS ASPECTOS FORMALES DE ESA DECISIÓN, SINO INCLUSO, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA ACTORA.	P. IV/2015 (10a.)	159
CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES		

	Número de identificación	Pág.
FUNDAMENTAL EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL REALIZADA POR LA JUNTA RESPONSABLE, DADA SU ESPECIAL RELEVANCIA.	P. V/2015 (10a.)	160
CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).	2a./J. 17/2015 (10a.)	699
CRÉDITO PREFERENTE EN MATERIA LABORAL. TIENE ESE CARÁCTER EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS.	(V Región)5o.22 L (10a.)	1711
CRÉDITOS PREFERENTES EN MATERIA LABORAL. LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAS VACACIONES NO TIENEN ESE CARÁCTER.	(V Región)5o.21 L (10a.)	1712
FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997", DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012.	2a./J. 20/2015 (10a.)	760
JORNADA EXTRAORDINARIA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL TRABAJADOR CUANDO LA RECLAMADA EXCEDE DE 9 HORAS SEMA-		

	Número de identificación	Pág.
NALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	I.9o.T.44 L (10a.)	1741
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. ES DE MALA FE SI EL TRABAJADOR PRECISA UN SALARIO QUE EL PATRÓN ACEPTA Y OFRECE EN SU CONTESTACIÓN, PERO DE AUTOS QUEDA DEMOSTRADO QUE AQUÉL PERCIBÍA CIERTA REMUNERACIÓN ADICIONAL EN FORMA ORDINARIA.	I.13o.T.117 L (10a.)	1760
PENSIÓN ANUAL DE VEJEZ. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA BÁSICA MENSUAL E INCREMENTOS ANUALES, DEBE ATENDERSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167 DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL.	I.6o.T.130 L (10a.)	1764
PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA.	PC.XXX. J/12 A (10a.)	1345
PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO.	PC.V. J/2 A (10a.)	951
PENSIONES. SU CUANTÍA DEBE SER PROPORCIONAL A LO QUE CUANTITATIVAMENTE APORTABA EL TRABAJADOR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES		

	Número de identificación	Pág.
DEL ESTADO, EN FUNCIÓN DE LO QUE REALMENTE SE LE DESCONTABA PARA EL FONDO RELATIVO Y DEL PORCENTAJE QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA LE CORRESPONDÍA PARA TAL FIN, CON INDEPENDENCIA DE LOS CONCEPTOS O DEL MONTO QUE COMO SUELDO BÁSICO DE COTIZACIÓN APAREZCA EN SU HOJA ÚNICA DE SERVICIOS.	I.2o.A.16 A (10a.)	1765
PENSIONES Y JUBILACIONES. EL DERECHO AL PAGO DE SUS DIFERENCIAS POR INCREMENTOS ES IMPRESCRIPTIBLE.	XI.1o.A.T.23 L (10a.)	1767
PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. PARA ACREDITAR EL CARÁCTER DE ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO PUEDE PRESENTARSE CÉDULA PROFESIONAL, FEDERAL O ESTATAL, EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE.	XVII.1o.C.T.45 L (10a.)	1768
PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA QUE PROCEDA LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DERIVADA DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA, DEBE NOTIFICARSE A LA SECCIÓN SINDICAL CORRESPONDIENTE CON 3 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A SU APLICACIÓN (CLÁUSULA 24 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO).	I.9o.T.43 L (10a.)	1769
PREFERENCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. A EFECTO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTORIO DE LA ACCIÓN, ES INSUFICIENTE ACREDITAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE QUIEN SE LE ASIGNÓ EL PUESTO DEMANDADO.	I.13o.T.119 L (10a.)	1787
PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y SUBSECUENTE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL. EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), EN SU CARÁC-		

	Número de identificación	Pág.
TER DE LIQUIDADOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CARECE DE INTERÉS PARA IMPUGNAR LO DETERMINADO EN ÉL.	I.6o.T.128 L (10a.)	1788
PRÓRROGA DEL CONTRATO LABORAL. SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE MANERA SUBSIDIARIA A LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO.	I.13o.T.118 L (10a.)	1811
RELACIÓN DE TRABAJO. CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE SU NEGATIVA.	I.6o.T. J/22 (10a.)	1572
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR UN MOTIVO RAZONABLE DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA, CONFORME AL ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.	IV.3o.T.27 L (10a.)	1833
SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL.	I.6o.T. J/21 (10a.)	1628
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS.	2a. XV/2015 (10a.)	841
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APAR-		

	Número de identificación	Pág.
TADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a. XIV/2015 (10a.)	842
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESPONDE ACREDITARLA A ÉSTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 67/2010).	I.3o.T.28 L (10a.)	1857
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVARSE CUANDO EL ACTOR RECLAMA EL RECONOCIMIENTO DE UN NOMBRAMIENTO DE BASE Y LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO SE SUSTENTA EN QUE LA RELACIÓN FUE DE CARÁCTER CIVIL.	I.3o.T.27 L (10a.)	1858
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN CUYAS FUNCIONES SEAN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, DEBEN SER CONSIDERADOS CON AQUEL CARÁCTER.	I.6o.T.127 L (10a.)	1860
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. DE LOS HECHOS NARRADOS EN SU DEMANDA PUEDE DERIVARSE LA PRESUNCIÓN DE QUE SU TRABAJO ES POR OBRA DETERMINADA.	VI.1o.T.5 L (10a.)	1861
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	I.6o.T.129 L (10a.)	1863

Índice en Materia Común

	Número de identificación	Pág.
ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. LOS CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES EMANADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, COMO LA ORDEN DE TRASLADO DEL SENTENCIADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO.	III.2o.P.75 P (10a.)	1657
ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS.	P./J. 7/2015 (10a.)	5
ACTUACIONES JUDICIALES CARENTES DE FIRMA Y/O NOMBRE Y APELLIDO DE QUIENES EN ELLAS INTERVIENEN. AL CARECER DE EFICACIA JURÍDICA, DEBEN DECLARARSE INVÁLIDAS, LO QUE GENERA SU NULIDAD [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.) A LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA].	(IX Región)1o.3 K (10a.)	1658
AMPARO ADHESIVO. EL TERCERO INTERESADO QUE LO PROMUEVE NO SE CONVIERTE EN UN QUEJOSO ADHERENTE, SINO QUE CONSERVA ESE CARÁCTER.	XXVII.3o.76 K (10a.)	1660

	Número de identificación	Pág.
AMPARO ADHESIVO. LO QUE JUSTIFICA SU ESTUDIO ES LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PRINCIPAL.	XI.1o.A.T.20 K (10a.)	1661
AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS.	PC.V. J/1 A (10a.)	949
AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA [ABANDONO DE LAS TESIS 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) Y 2a. LXXVI/2014 (10a.) (*)].	2a. XXII/2015 (10a.)	833
AMPARO DIRECTO. NO ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO EN LA CAUSA DE ORIGEN CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA, SI EL SENTENCIADO TAMBIÉN HIZO VALER ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN EL CUAL FUE ADMITIDO POR EL TRIBUNAL UNITARIO SEÑALADO POR AQUÉL COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.	III.2o.P.74 P (10a.)	1662
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE		

	Número de identificación	Pág.
LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)].	(V Región)5o.20 L (10a.)	1663
ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X –PRIMERA PARTE–, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN.	PC.V. J/3 A (10a.)	1014
BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. SU PRESIDENTE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.	I.1o.A.25 K (10a.)	1669
CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)].	II.1o.18 P (10a.)	1693
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DETERMINAR Y CALIFICAR EN DEFINITIVA UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL		

	Número de identificación	Pág.
TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.	I.3o.P.23 P (10a.)	1694
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS APLICADOS AL QUEJOSO EN UNA SENTENCIA DE NULIDAD PREVIA A LA RECLAMADA, DICTADA ÉSTA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, AL NO HABER CONTROVERTIDO PREVIAMENTE ESE ASPECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.	IV.2o.A.82 K (10a.)	1695
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD.	IV.2o.A.83 K (10a.)	1697
CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.	(V Región)2o.1 K (10a.)	1699
CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO DECLINA SU COMPETENCIA EN FAVOR DEL JUZGADO "EN TURNO" EN UN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, Y LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE ESE LUGAR SE NIEGA A RECIBIR EL OFICIO CORRES-		

	Número de identificación	Pág.
PONDIENTE, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE ESTÁ IMPOSIBILITADA LEGALMENTE PARA HACERLO.	VI.2o.P.4 K (10a.)	1702
CONFLICTO COMPETENCIAL. ES INEXISTENTE SI UN JUZGADO DE DISTRITO LO PLANTEA ENTRE ÉL Y EL QUE SE ENCUENTRE "EN TURNO" EN UN DETERMINADO CIRCUITO JUDICIAL, SIN QUE SE ADVIERTA PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL EN ESPECÍFICO, EN EL SENTIDO DE QUE NO ACEPTA CONOCER DEL ASUNTO SOMETIDO A SU JURISDICCIÓN.	VI.2o.P.5 K (10a.)	1702
CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL LAUDO QUE LOS RESUELVE, PERMITE AL JUZGADOR EXAMINAR NO SÓLO LOS ASPECTOS FORMALES DE ESA DECISIÓN, SINO INCLUSO, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA ACTORA.	P. IV/2015 (10a.)	159
CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES FUNDAMENTAL EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL REALIZADA POR LA JUNTA RESPONSABLE, DADA SU ESPECIAL RELEVANCIA.	P. V/2015 (10a.)	160
CONSTANCIAS REMITIDAS CON EL INFORME JUSTIFICADO. NO PUEDE NEGARSE AL QUEJOSO IMPONERSE DE ÉSTAS, AUN CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) LAS HAYA ESTIMADO COMO RESERVADAS, SI PUEDE ELABORAR UNA VERSIÓN DE AQUÉLLAS PARA PONERSE A LA VISTA DE LAS PARTES, Y SIN VIOLAR EL SIGILO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA –DE DONDE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO–, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.	II.2o.P.14 K (10a.)	1703

	Número de identificación	Pág.
CONTRATO DE FIDEICOMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO.	I.3o.C.157 C (10a.)	1705
COSA JUZGADA. NO OPERA TRATÁNDOSE DEL DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA NUEVAMENTE CONTRA UNA SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN DICTADA ANTES DEL 3 DE ABRIL DE 2013, CUANDO AQUÉLLA PREVIAMENTE SE DESECHÓ POR CONSIDERARSE QUE EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA NUEVA LEY DE LA MATERIA PRECLUYÓ CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA, NO OBSTANTE QUE LA PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 39/2014 (10a.), SE LLEVARA A CABO POSTERIORMENTE.	VI.2o.P.7 K (10a.)	1708
COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.	I.3o.C.183 C (10a.)	1709
DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. EL MECANISMO PARA DETERMINAR EL MONTO QUE LOS GARANTICE, DEBE CONSIDERAR LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE VEINTIOCHO DÍAS, QUE EQUIVALE A UN MES; LA CUANTÍA DEL NEGOCIO Y EL TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 110/2013 (10a.)].	III.2o.C.8 K (10a.)	1715

	Número de identificación	Pág.
DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN.	XXVII.3o. J/14 (10a.)	1451
EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO.	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508
FALSA REPRESENTACIÓN. NO SE ACTUALIZA ESA VIOLACIÓN PROCESAL EN CASO DE QUE UNA DE LAS PARTES HUBIERA TENIDO UN DEFICIENTE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN UN JUICIO POR PARTE DEL PROFESIONISTA QUE DESIGNÓ PARA SU DEFENSA.	I.1o.A.24 K (10a.)	1727
GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN. FORMA DE CALCULARLA CON BASE EN LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO.	I.8o.C. J/1 (10a.)	1497
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO.	P./J. 4/2015 (10a.)	6
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO,		

	Número de identificación	Pág.
DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.	P./J. 5/2015 (10a.)	8
IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO EN REVISIÓN. LA REGLA PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO RIGE CUANDO ES LA PROPIA QUEJOSA QUIEN SOLICITA SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO.	XXIV.1o.3 K (10a.)	1733
IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. EN CASO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTUDIE LA CAUSA ADUCIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES AL SOBRESEER POR UN MOTIVO DISTINTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA ESA DETERMINACIÓN, PUEDE ACOGER AQUÉLLA SIN NECESIDAD DE DAR VISTA PREVIAMENTE AL RECURRENTE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	VII.1o.A. J/1 (10a.)	1505
INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. AUN CUANDO ESTÁ RELACIONADA CON UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SÓLO PUEDE SER PROMOVIDO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.	I.1o.A.21 K (10a.)	1733
INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	XXVII.3o.75 K (10a.)	1734
INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO MENOR DE EDAD CUANDO		

	Número de identificación	Pág.
RECLAMA QUE LO PRIVARON DE CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMARIA), SIN QUE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE (AUTORIDAD RESPONSABLE) LE EXPRESARA LAS RAZONES Y LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES OBSTACULIZÓ EL EJERCICIO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL.	VIII.1o.P.A.1 K (10a.)	1736
JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ANÁLISIS QUE DEBEN REALIZAR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.	2a. XXIII/2015 (10a.)	836
LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA TIENE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA PROMOVERLO CONTRA LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA QUE PUEDE AFECTAR EL INMUEBLE EN EL QUE REALIZA SUS FUNCIONES, OTORGADA CON APOYO EN UNA LEY ANTE LA QUE SE ENCUENTRA EN UN PLANO DE IGUALDAD CON QUIEN GESTIONÓ A SU FAVOR EL ACTO.	(V Región)5o.24 K (10a.)	1743
LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA.	PC.IV.A. J/9 A (10a.)	1262

	Número de identificación	Pág.
MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN.	XI.1o.A.T.18 K (10a.)	1745
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA).	I.3o.C.160 C (10a.)	1746
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.P.25 P (10a.)	1749
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NO ES SUSCEPTIBLE DE INVOCARSE COMO NOTORIA Y MANIFIESTA, Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE HASTA QUE AQUÉLLA SE ADMITE Y LA LITIS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA.	I.3o.P.26 P (10a.)	1750
ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE		

	Número de identificación	Pág.
SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA).	(V Región)5o.18 P (10a.)	1761
PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO.	XXVII.3o.77 K (10a.)	1763
PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.	III.1o.A.5 K (10a.)	1764
PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO.	PC.V. J/2 A (10a.)	951
PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA.	III.2o.A.62 A (10a.)	1770
PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.2o.A.81 K (10a.)	1770

	Número de identificación	Pág.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL Y SUBSECUENTE DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL. EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), EN SU CARÁCTER DE LIQUIDADOR DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, CARECE DE INTERÉS PARA IMPUGNAR LO DETERMINADO EN ÉL.	I.6o.T.128 L (10a.)	1788
PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES ÚTIL PARA INTERPRETARLAS CUANDO ÉSTAS REGULAN FENÓMENOS COMPLEJOS Y TIENEN EFECTOS ECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS, ENTENDER ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON SU EMISIÓN O COMPRENDER SU ALCANCE O LA AFECTACIÓN QUE PROVOCAN.	I.1o.A.E.26 K (10a.)	1812
PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ANALIZAR ASPECTOS TÉCNICOS, SOLICITADA POR LOS PERITOS PARA ELABORAR SU DICTAMEN.	I.1o.A.E.27 K (10a.)	1812
PRUEBAS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. CONFORME AL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SON ADMISIBLES LAS QUE TIENDEN A DESESTIMAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.	VI.2o.P.6 K (10a.)	1815

	Número de identificación	Pág.
QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA PROVEER SOBRE EL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI AQUÉLLA JUSTIFICA QUE REALIZÓ LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA TURNARLA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.	XX.2o.3 K (10a.)	1817
RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONERSE CONTRA LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y, EVENTUALMENTE, PROCEDE SU AMPLIACIÓN SI SE PRESENTA EN TIEMPO, PERO NO SU DUPLICIDAD CONTRA LA MISMA DETERMINACIÓN [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013].	(I Región)1o.2 K (10a.)	1821
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AUNQUE SÓLO PRETENDA IMPUGNARSE LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	II.2o.A.1 K (10a.)	1822
RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ.	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823
REMATE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA, POR SER AUTÓNOMA Y AJENA A LA COSA		

	Número de identificación	Pág.
JUZGADA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [MODIFICACIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.13o.C.7 K (10a.)].	I.13o.C.16 C (10a.)	1827
REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	I.1o.A.23 K (10a.)	1830
REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	I.1o.A.22 K (10a.)	1831
RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU CONCEPTO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2014 (10a.) (*)].	2a. XXI/2015 (10a.)	837
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO.	2a./J. 25/2015 (10a.)	827
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES SOSTENIDAS		

	Número de identificación	Pág.
EN JUICIOS DE AMPARO RESUELTOS PREVIAMENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE RECONOCIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CUYA INVALIDEZ IMPUGNA EL RECURRENTE HASTA EL ESCRITO DE REVISIÓN, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO.	2a. XIX/2015 (10a.)	840
REVISIÓN EN AMPARO. EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.	(I Región)4o.5 K (10a.)	1837
REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI AL EJERCER SU COMPETENCIA DELEGADA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DESESTIMAN ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO O LOS EFECTOS DE UNA POSIBLE CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL, TAL DECISIÓN NO VINCULA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	2a. XXIV/2015 (10a.)	841
SENTENCIAS DE AMPARO. LOS EFECTOS DE LAS QUE SE DICTAN EN LOS JUICIOS QUE DECIDEN SOBRE DERECHOS O INTERESES SUPRAINDIVIDUALES O INDIVISIBLES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE PARTICIPAN EN EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE EXTIENDEN A TODOS LOS MIEMBROS DE ESE COLECTIVO.	I.1o.A.E.50 A (10a.)	1843
SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI UN JUEZ DE GARANTÍA, EN AUXILIO DEL QUE SIGUE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL QUEJOSO SEÑALA A AMBOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, PROCEDE DECRETAR AQUÉL POR LO QUE HACE A QUIEN ACTUÓ EN AUXILIO, SIN NECESIDAD DE OTORGARLE LA		

	Número de identificación	Pág.
VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN TANTO QUE DICHO SOBRESEIMIENTO NO LE CAUSA PERJUICIO.	XVII.2o.P.A.13 P (10a.)	1843
SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INCORRECTO DECRETARLO POR NEGATIVA DE ACTOS, AL NO CONSTITUIR ÉSTA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.	I.3o.P.2 K (10a.)	1844
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. SÓLO PROCEDE APLICARLA CUANDO LE BENEFICIE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).	P. VI/2015 (10a.)	161
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO.	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
SUSPENSIÓN. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ DIRIGIDA AL JUEZ CONSTITUCIONAL Y NO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.	I.3o.C.76 K (10a.)	1845
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).	XVII.1o.P.A.16 P (10a.)	1847
TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA SATELITAL Y TERRE-		

	Número de identificación	Pág.
NAL TIENEN LA CALIDAD DE TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE CONTROVIERTAN LOS LINEAMIENTOS DE *MUST CARRY* Y *MUST OFFER*.	I.1o.A.E.51 A (10a.)	1852
TEORÍA DE LA ASUNCIÓN JUDICIAL. SUS POSTULADOS SE CUMPLEN CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL REPARA LA TRANSGRESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE OCASIONÓ ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL Y CON ELLO EVITA UNA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN EL PLANO INTERNACIONAL.	XI.1o.A.T.19 K (10a.)	1854
TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL AMPARO INDIRECTO NO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE LA EMISIÓN DE CADA ACTO TENDENTE A LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE ÉSTA.	I.3o.C.84 K (10a.)	1854
TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO.	I.3o.C.74 K (10a.)	1855
TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.	I.5o.P.32 P (10a.)	1856

	Número de identificación	Pág.
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 6/2015 (10a.	95
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.	I.1o.A. J/7 (10a.)	1641
VIOLACIONES DE FONDO. AUNQUE ÉSTAS RESULTARAN FUNDADAS Y GENERARAN UN MAYOR BENEFICIO, CUANDO LA RESPONSABLE INCURRA EN UNA VIOLACIÓN FORMAL AL NO ESTUDIAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL DEMANDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, A FIN DE DEPURAR LOS TEMAS QUE DEBAN QUEDAR FIRMES Y LOGRAR UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL EVITAR UNA MULTIPLICIDAD DE AMPAROS, DEBE OCUPARSE DEL ANÁLISIS DE AMBAS INFRACCIONES.	I.3o.C.78 K (10a.)	1865
VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE POR CUANTO VE A LA ACCIÓN PRINCIPAL LAS HACE VALER EN AMPARO DIRECTO, LA TRASCENDENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN DEBE ACOTARSE ÚNICAMENTE A LA PARTE DEL FALLO QUE NO LE RESULTÓ BENÉFICO.	(IX Región)1o.5 K (10a.)	1865
VIOLACIONES PROCESALES. ORDEN EN QUE DEBEN PLANTEARSE PARA SU ESTUDIO EN EL AMPARO DIRECTO.	I.3o.C.83 K (10a.)	1866

Índice de Jurisprudencia por Contradicción

	Número de identificación	Pág.
ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS.	P./J. 7/2015 (10a.)	5

Contradicción de tesis 357/2014. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 12 de marzo de 2015. Mayoría de siete votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; votaron en contra: Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE	PC.V. J/1 A (10a.)	949

	Número de identificación	Pág.
PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS.		
Contradicción de tesis 3/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 27 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, Francisco Domínguez Castelo, Hugo Gómez Ávila y Federico Rodríguez Celis; el Magistrado Hugo Gómez Ávila formuló voto aclaratorio, en el que estimó innecesaria la emisión de esta tesis, al comprender a todas las normas generales heteroaplicativas. Disidente: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Ponente: Federico Rodríguez Celis. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez.		
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA).	1a./J. 8/2015 (10a.)	478
Contradicción de tesis 130/2014. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 21 de enero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz.		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X –PRIMERA PARTE–, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN.	PC.V. J/3 A (10a.)	1014

Contradicción de tesis 1/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 26 de noviembre de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, Hugo Gómez Ávila, Federico Rodríguez Félix, José Manuel Blanco Quihuis y Francisco Domínguez Castelo. Ponente: Francisco Domínguez Castelo. Secretaria: Claudia Guadalupe Téllez Fimbres.

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN.	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086

Contradicción de tesis 13/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17 de febrero de 2015. Unanimidad de tres votos de los Magistrados José Carlos Rodríguez Navarro, Antonio Ceja Ochoa y Miguel Ángel Cantú Cisneros.

	Número de identificación	Pág.
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.		
CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Contradicción de tesis 94/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 de febrero de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa.	2a./J. 17/2015 (10a.)	699
COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. Contradicción de tesis 5/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 6 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados José Luis Rodríguez Santillán, Miguel Ángel Alvarado Servín, Silverio Rodríguez Carrillo y Esteban Álvarez Troncoso. Disidentes: Lucila Castelán Rueda y Álvaro Ovalle Álvarez. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretaria: Lisbet Catalina Soto Martínez.	PC.XXX. J/11 C (10a.)	1121
DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE	1a./J. 7/2015 (10a.)	480

	Número de identificación	Pág.
UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA.		
Contradicción de tesis 130/2014. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 21 de enero de 2015. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz.		
FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997", DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012.	2a./J. 20/2015 (10a.)	760
Contradicción de tesis 249/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, Noveno, Décimo Primero y Décimo Segundo, todos en Materia		

	Número de identificación	Pág.
de Trabajo del Primer Circuito, Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila y el entonces Cuarto de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. 18 de febrero de 2015. Cuatro votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.		
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO.	P./J. 4/2015 (10a.)	6
Contradicción de tesis 410/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 22 de enero de 2015. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, en contra de la consideración relativa a que la notificación respectiva se realice por lista y no en forma personal, Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de las consideraciones, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, con precisiones, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.		
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64,	P./J. 5/2015 (10a.)	8

Número de identificación **Pág.**

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.

Contradicción de tesis 325/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de enero de 2015. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, en contra de la consideración relativa a que la notificación respectiva se realice por lista y no en forma personal, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN "SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES", AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. PC.XIII. J/2 A (10a.) 1161

Contradicción de tesis 1/2014. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Tercer Circuito. 18 de febrero de 2015. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Valencia Méndez y Rodolfo Alberto Bandala Ávila. Disidente: María de Fátima Isabel

	Número de identificación	Pág.
Sámano Hernández. Ponente: Rodolfo Alberto Bandala Ávila. Secretario: David Jesús Velasco Santiago.		
LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contradicción de tesis 11/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 28 de octubre de 2014. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Luis Alfonso Hernández Núñez. Disidente: Sergio Javier Coss Ramos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. Contradicción de tesis 11/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 28 de octubre de 2014. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Sergio Javier Coss Ramos. Disidente y Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.	PC.IV.A. J/9 A (10a.)	1262
PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA	PC.XXX. J/12 A (10a.)	1345

	Número de identificación	Pág.
A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA. Contradicción de tesis 4/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito. 6 de marzo de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Lucila Castelán Rueda, Álvaro Ovalle Álvarez y José Luis Rodríguez Santillán, con ejercicio de voto de calidad de la primera de los nombrados en su carácter de Presidenta del Pleno del Trigésimo Circuito. Disidentes: Esteban Álvarez Troncoso, Miguel Ángel Alvarado Servín y Silverio Rodríguez Carrillo. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretaria: Rocío Itzel Valdez Contreras.		
PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO. Contradicción de tesis 3/2013. Entre las sustentadas por el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 27 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Armida Elena Rodríguez Celaya, Francisco Domínguez Castelo, Hugo Gómez Ávila y Federico Rodríguez Celis. Disidente: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Ponente: Federico Rodríguez Celis. Secretario: Hugo Reyes Rodríguez.	PC.V. J/2 A (10a.)	951
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL	2a./J. 19/2015 (10a.)	783

	Número de identificación	Pág.
PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).		
Contradicción de tesis 177/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 8 de octubre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.		
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO.	2a./J. 25/2015 (10a.)	827
Contradicción de tesis 301/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Cuarto del Décimo Octavo Circuito. 25 de febrero de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez		

	Número de identificación	Pág.
Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.		
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN. Contradicción de tesis 13/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 17 de febrero de 2015. Unanimidad de tres votos de los Magistrados José Carlos Rodríguez Navarro, Antonio Ceja Ochoa y Miguel Ángel Cantú Cisneros. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.	PC.IV.A. J/11 A (10a.)	1088
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Contradicción de tesis 38/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo en Materia Civil del Segundo Circuito. 26 de enero de 2015. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, apartándose de algunas consideraciones, José Fernando Franco	P./J. 6/2015 (10a.)	95

González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, apartándose de algunas consideraciones. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

Tabla General Temática de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

	Número de identificación	Pág.
Acceso a la impartición de justicia, derecho de.—Véase: "DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."	XXVII.1o.1 A (10a.)	1717
Acceso a la impartición de justicia, derecho de.—Véase: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA."	XXVII.1o. J/1 (10a.)	1426
Acceso a la jurisdicción, derecho fundamental de.—Véase: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI UN JUEZ DE GARANTÍA, EN AUXILIO DEL QUE SIGUE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL QUEJOSO SEÑALA A AMBOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, PROCEDE DECRETAR		

	Número de identificación	Pág.
AQUÉL POR LO QUE HACE A QUIEN ACTUÓ EN AUXILIO, SIN NECESIDAD DE OTORGARLE LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN TANTO QUE DICHO SOBRESEIMIENTO NO LE CAUSA PERJUICIO."	XVII.2o.P.A.13 P (10a.)	1843
Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA [ABANDONO DE LAS TESIS 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) Y 2a. LXXVI/2014 (10a.) (*)]."	2a. XXII/2015 (10a.)	833
Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "FALSA REPRESENTACIÓN. NO SE ACTUALIZA ESA VIOLACIÓN PROCESAL EN CASO DE QUE UNA DE LAS PARTES HUBIERA TENIDO UN DEFICIENTE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN UN JUICIO POR PARTE DEL PROFESIONISTA QUE DESIGNÓ PARA SU DEFENSA."	I.1o.A.24 K (10a.)	1727
Acceso a la justicia, derecho fundamental de.—Véase: "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ESTÁ OBLIGADO A RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE INTERCONEXIÓN INICIADOS A INSTANCIA DE PARTE."	I.1o.A.E.49 A (10a.)	1735
Acceso a la justicia, derecho humano de.—Véase: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92)."	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
Acción, derecho de.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA		

	Número de identificación	Pág.
SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
Amparo directo, procedencia del.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO."	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508
Amparo directo, procedencia del.—Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA)."	(V Región)5o.18 P (10a.)	1761
Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.25 P (10a.)	1749

	Número de identificación	Pág.
Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA)."	I.3o.C.160 C (10a.)	1746
Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NO ES SUSCEPTIBLE DE INVOCARSE COMO NOTORIA Y MANIFIESTA, Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE HASTA QUE AQUÉLLA SE ADMITE Y LA LITIS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA."	I.3o.P.26 P (10a.)	1750
Amparo, procedencia del.—Véase: "LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA."	PC.IV.A. J/9 A (10a.)	1262
Aplicación del conocimiento científico, garantía de.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863

	Número de identificación	Pág.
Audiencia, derecho de.—Véase: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]."	II.1o.18 P (10a.)	1693
Audiencia, derecho de.—Véase: "EMBARGOS. SI SE ORDENA SU CANCELACIÓN SOBRE LOS CONSTITUIDOS SOBRE UN INMUEBLE ADJUDICADO JUDICIALMENTE, SON INEFICACES EN TANTO NO PUEDEN RECAER EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, PUES ÉSTA NO ES CONSTITUTIVA DE DERECHOS."	VII.2o.C.90 C (10a.)	1725
Audiencia, derecho de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL CÓNYUGE QUE AFIRMA TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN, APOYADO EN LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE LO UNE CON EL DEMANDADO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERVENIR EN EL JUICIO RELATIVO, AUNQUE TAL RÉGIMEN PATRIMONIAL NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD."	1a. CXXVI/2015 (10a.)	506
Audiencia, derecho de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE		

	Número de identificación	Pág.
DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO."	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508
Audiencia, derecho de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
Audiencia, derecho de.—Véase: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN."	P./J. 5/2015 (10a.)	8
Audiencia, derecho de.—Véase: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
Audiencia, garantía de.—Véase: "DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN."	XXVII.3o. J/14 (10a.)	1451
Autonomía, principio de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXVIII/2015 (10a.)	513

	Número de identificación	Pág.
Buena fe, principio general de.—Véase: "DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. SU DERIVACIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DEL PRINCIPIO GENERAL DE BUENA FE."	I.3o.C. J/11 (10a.)	1487
Certeza jurídica, principio de.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AUNQUE SÓLO PRETENDA IMPUGNARSE LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	II.2o.A.1 K (10a.)	1822
Congruencia, principio de.—Véase: "RENTAS. SI EL DEUDOR NO OPONE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES RENTÍSTICAS, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZARLA OFICIOSAMENTE."	I.3o.C.176 C (10a.)	1828
Conservación de las actuaciones judiciales en materia mercantil, principio de.—Véase: "ACTUACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SON VÁLIDAS LAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD DECLARADA INCOMPETENTE POR DECLINATORIA Y, POR TANTO, LAS REALIZADAS POSTERIORMENTE, AL SER INDEPENDIENTES Y NO VERSE AFECTADAS DEBEN CONSERVARSE."	I.3o.C.218 C (10a.)	1657
Consulta, derecho de.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PRE-		

	Número de identificación	Pág.
VISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Debida fundamentación, violación al derecho fundamental de.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES SOSTENIDAS EN JUICIOS DE AMPARO RESUELTOS PREVIAMENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE RECONOCIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CUYA INVALIDEZ IMPUGNA EL RECURRENTE HASTA EL ESCRITO DE REVISIÓN, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO."	2a. XIX/2015 (10a.)	840
Debida motivación, violación al derecho fundamental de.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES SOSTENIDAS EN JUICIOS DE AMPARO RESUELTOS PREVIAMENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE RECONOCIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CUYA INVALIDEZ IMPUGNA EL RECURRENTE HASTA EL ESCRITO DE REVISIÓN, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO."	2a. XIX/2015 (10a.)	840
Debido proceso, derecho al.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
Debido proceso, derecho fundamental al.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES. ORDEN EN QUE DE-		

	Número de identificación	Pág.
BEN PLANTEARSE PARA SU ESTUDIO EN EL AMPARO DIRECTO."	I.3o.C.83 K (10a.)	1866
Debido proceso, derecho humano al.—Véase: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU IMPACTO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE UNA DEFENSA ADECUADA Y EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA EN MATERIA PENAL."	1a. CXXXVI/2015 (10a.)	516
Debido proceso, derecho humano al.—Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE COMPROMETA A PRESENTARLOS."	XIX.1o.A.C.6 C (10a.)	1814
Debido proceso, violación del derecho al.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO."	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508
Debido proceso, violación del derecho humano al.—Véase: "FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA PUEDE REALIZARSE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO."	VII.4o.P.T.16 P (10a.)	1728
Debido proceso, violación del derecho humano al.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA		

	Número de identificación	Pág.
PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE."	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
Defensa adecuada, derecho a una.—Véase: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU IMPACTO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE UNA DEFENSA ADECUADA Y EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA EN MATERIA PENAL."	1a. CXXXVI/2015 (10a.)	516
Defensa adecuada, garantía de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO."	1a./J. 23/2015 (10a.)	331
Defensa, derecho de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE."	1a./J. 18/2015 (10a.)	335
Defensa, violación al derecho humano de.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE."	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
Definitividad en el amparo, excepción al principio de.—Véase: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 6/2015 (10a.)	95

	Número de identificación	Pág.
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	2a./J. 19/2015 (10a.)	783
Derecho al mínimo vital, principio de.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Derecho de los menores a recibir educación básica.—Véase: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO		

	Número de identificación	Pág.
INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO MENOR DE EDAD CUANDO RECLAMA QUE LO PRIVARON DE CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMARIA), SIN QUE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE (AUTORIDAD RESPONSABLE) LE EXPRESARA LAS RAZONES Y LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES OBSTACULIZÓ EL EJERCICIO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL."	VIII.1o.P.A.1 K (10a.)	1736
Doble instancia judicial, derecho a la.—Véase: "RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE."	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
Economía procesal, principio de.—Véase: "ACTUACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SON VÁLIDAS LAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD DECLARADA INCOMPETENTE POR DECLINATORIA Y, POR TANTO, LAS REALIZADAS POSTERIORMENTE, AL SER INDEPENDIENTES Y NO VERSE AFECTADAS DEBEN CONSERVARSE."	I.3o.C.218 C (10a.)	1657
Educación, derecho fundamental de.—Véase: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO MENOR DE EDAD CUANDO RECLAMA QUE LO PRIVARON DE CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMARIA), SIN QUE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE (AUTORIDAD RESPONSABLE) LE EXPRESARA LAS RAZONES Y LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES OBSTACULIZÓ EL EJERCICIO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL."	VIII.1o.P.A.1 K (10a.)	1736

	Número de identificación	Pág.
Equidad tributaria, principio de.—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO O AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNE TOTAL O PARCIALMENTE UN RÉGIMEN FISCAL OPTATIVO, CUYA IMPLEMENTACIÓN OBEDECE A FINES EXTRAFISCALES."	2a. XIII/2015 (10a.)	835
Equidad tributaria, principio de.—Véase: "CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
Equidad tributaria, principio de.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD."	2a./J. 26/2015 (10a.)	640
Estabilidad procesal, principio de.—Véase: "ACTUACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SON VÁLIDAS LAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD DECLARADA INCOMPETENTE POR DECLINATORIA Y, POR TANTO, LAS REALIZADAS POSTERIORMENTE, AL SER INDEPENDIENTES Y NO VERSE AFECTADAS DEBEN CONSERVARSE."	I.3o.C.218 C (10a.)	1657
Estabilidad y permanencia en el empleo, principio de.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	2a. XV/2015 (10a.)	841

	Número de identificación	Pág.
Estricto derecho, principio de.—Véase: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. RAZONAMIENTO COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR, PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO."	(V Región)2o.1 K (10a.)	1699
Exacta aplicación de la ley penal, derecho fundamental de.—Véase: "POSESIÓN DE UNIFORMES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FALSIFICADOS. EL ARTÍCULO 250 BIS 1, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ DICHO DELITO NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL."	I.9o.P.78 P (10a.)	1771
Familia, derecho a la.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)]."	(V Región)5o.20 L (10a.)	1663
Formalidades esenciales del procedimiento.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
Formalidades esenciales del procedimiento.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE."	1a./J. 18/2015 (10a.)	335

	Número de identificación	Pág.
Igualdad, derecho a la.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD."	2a./J. 27/2015 (10a.)	641
Igualdad, violación al derecho constitucional de.—Véase: "VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES."	I.1o.A. J/8 (10a.)	1642
Indemnización, derecho a una.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	2a. XV/2015 (10a.)	841
Indemnización, derecho a una.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a. XIV/2015 (10a.)	842
Independencia, principio universal de.—Véase: "MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPON-		

	Número de identificación	Pág.
SABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN."	XI.1o.A.T.18 K (10a.)	1745
Información, derecho de.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Instancia, derecho de.—Véase: "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ESTÁ OBLIGADO A RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE INTERCONEXIÓN INICIADOS A INSTANCIA DE PARTE."	I.1o.A.E.49 A (10a.)	1735
Interdependencia, principio de.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
Interés superior del menor.—Véase: "ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO 'PADRASTRO' PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."	I.9o.P.75 P (10a.)	1655
Interés superior del menor.—Véase: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL		

	Número de identificación	Pág.
QUEJOSO MENOR DE EDAD CUANDO RECLAMA QUE LO PRIVARON DE CONTINUAR CON SU EDUCACIÓN BÁSICA (PRIMARIA), SIN QUE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE (AUTORIDAD RESPONSABLE) LE EXPRESARA LAS RAZONES Y LOS FUNDAMENTOS POR LOS CUALES OBSTACULIZÓ EL EJERCICIO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL."	VIII.1o.P.A.1 K (10a.)	1736
Interés superior del menor.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PUEDE DECRETARLA Y COMO COMPLEMENTO EL SOMETIMIENTO A UN PROCESO TERAPÉUTICO (PADRES E HIJOS) A FIN DE RELACIONARSE ADECUADAMENTE, SIN QUE ELLO CAUSE UN PERJUICIO IRREPARABLE AL PROGENITOR, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ LA MEDIDA."	I.3o.C.163 C (10a.)	1846
Interés superior del menor.—Véase: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.C. J/16 (10a.)	1651
Investigación, garantía de.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Inviolabilidad del domicilio, derecho humano a la.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DEBE IDENTIFICARSE ANTES DE ENTRAR AL DOMICILIO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE ÉSTE."	II.3o.A.195 A (10a.)	1868

	Número de identificación	Pág.
Irretroactividad de la ley, principio de.—Véase: "PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA."	PC.XXX. J/12 A (10a.)	1345
Jurisdicción, derecho a la.—Véase: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92)."	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
Justicia completa, derecho a la.—Véase: "EMBARGOS. SI SE ORDENA SU CANCELACIÓN SOBRE LOS CONSTITUIDOS SOBRE UN INMUEBLE ADJUDICADO JUDICIALMENTE, SON INEFICACES EN TANTO NO PUEDEN RECAER EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO LA ESCRITURA NO ESTÉ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, PUES ÉSTA NO ES CONSTITUTIVA DE DERECHOS."	VII.2o.C.90 C (10a.)	1725
Justicia penal, derecho a la.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
Justicia social, principio de.—Véase: "CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL LAUDO QUE LOS RESUELVE, PERMITE AL JUZGADOR EXAMINAR NO SÓLO LOS ASPECTOS FORMALES DE		

	Número de identificación	Pág.
ESA DECISIÓN, SINO INCLUSO, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA ACTORA."	P. IV/2015 (10a.)	159
Justicia social, principio de.—Véase: "CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES FUNDAMENTAL EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL REALIZADA POR LA JUNTA RESPONSABLE, DADA SU ESPECIAL RELEVANCIA."	P. V/2015 (10a.)	160
Legalidad, derecho de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
Legalidad, garantía de.—Véase: "DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN."	XXVII.3o. J/14 (10a.)	1451
Legalidad, principio de.—Véase: "CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
Legalidad, principio de.—Véase: "MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN."	XI.1o.A.T.18 K (10a.)	1745
Legalidad tributaria, principio de.—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LA DEMANDA DE AM-		

	Número de identificación	Pág.
PARO O AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNE TOTAL O PARCIALMENTE UN RÉGIMEN FISCAL OPTATIVO, CUYA IMPLEMENTACIÓN OBEDECE A FINES EXTRAFISCALES."	2a. XIII/2015 (10a.)	835
Libertad de cátedra, garantía de.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Libertad de trabajo, garantía de.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Libertad, derecho a la.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)]."	(V Región)5o.20 L (10a.)	1663
Libertad, derecho humano a la.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO)."	XVII.1o.P.A.16 P (10a.)	1847

	Número de identificación	Pág.
Libre concurrencia y competencia, derecho a la.—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA)."	I.1o.A.E.38 A (10a.)	1850
Libre examen y discusión de las ideas, garantía de.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Mínima intervención del derecho penal, principio de.—Véase: "DELITO CONTRA LA SALUD. NO SE ACREDITA LA MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN EN SU HIPÓTESIS DE COMPRA AGRAVADA (POR ENCONTRARSE EL INCULPADO A MENOS DE TRESCIENTOS METROS DE UN CENTRO EDUCATIVO), SINO LA DIVERSA DE POSESIÓN SIMPLE, SI QUIEN LO COMETIÓ ES FARMACODEPENDIENTE Y LA CANTIDAD QUE ADQUIRIÓ ES MENOR O IGUAL A LA PREVISTA EN LA TABLA DE ORIENTACIÓN DE DOSIS MÁXIMAS DE CONSUMO PERSONAL E INMEDIATO."	I.9o.P.77 P (10a.)	1716
Normas autoaplicativas.—Véase: "VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA."	I.1o.A. J/7 (10a.)	1641
Notificación, derecho de.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO		

	Número de identificación	Pág.
FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Posesión, derecho a la.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)]."	(V Región)5o.20 L (10a.)	1663
Presunción de buena fe, principio de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO."	1a./J. 23/2015 (10a.)	331
Presunción de buena fe, principio de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE."	1a./J. 18/2015 (10a.)	335
Presunción de inocencia, principio de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO."	1a./J. 23/2015 (10a.)	331

	Número de identificación	Pág.
Presunción de inocencia, principio de.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Principio *in dubio pro reo*.—Véase: "PRINCIPIO PRO PERSONA. ÚNICAMENTE ES APLICABLE PARA INTERPRETAR LA NORMA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y NO PARA INSTAURAR UN CRITERIO SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS."	(IV Región)2o.1 CS (10a.)	1788
Principio *pro actione*.—Véase: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92)."	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
Principio pro persona.—Véase: "ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO 'PADRASTRO' PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."	I.9o.P.75 P (10a.)	1655
Principio pro persona.—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO		

	Número de identificación	Pág.
PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD."	IV.2o.A.83 K (10a.)	1697
Principio pro persona.—Véase: "REDUCCIÓN DE LA PENA EN DELITOS GRAVES. EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROCEDE AUN CUANDO EL SUJETO ACTIVO HAYA CONFESADO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO EN VÍA DE PREPARATORIA, SIEMPRE QUE ÉSTA FUERE SU PRIMERA OPORTUNIDAD DE DECLARAR EN TORNO AL HECHO IMPUTADO."	I.5o.P.33 P (10a.)	1825
Principio pro persona.—Véase: "REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SÓLO CUANDO NO EXISTEN PRUEBAS DIRECTAS QUE SIRVAN DE PARÁMETRO PARA FIJAR SU MONTO, ES APLICABLE EL QUE DE FORMA SUBSIDIARIA ESTABLECE (EN DÍAS MULTA) EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO."	II.2o.P.32 P (10a.)	1829
Principio pro persona.—Véase: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92)."	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
Procedencia lícita de bienes, prueba de la.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE."	1a./J. 18/2015 (10a.)	335

	Número de identificación	Pág.
Progresividad de los derechos humanos, principio de.—Véase: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES."	I.1o.A.E.48 A (10a.)	1655
Propiedad, derecho de.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)]."	(V Región)5o.20 L (10a.)	1663
Propiedad, derecho de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL CÓNYUGE QUE AFIRMA TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN, APOYADO EN LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE LO UNE CON EL DEMANDADO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERVENIR EN EL JUICIO RELATIVO, AUNQUE TAL RÉGIMEN PATRIMONIAL NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD."	1a. CXXVI/2015 (10a.)	506
Propiedad, derecho de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
Propiedad, derecho de.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES,		

	Número de identificación	Pág.
NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXXVII/2015 (10a.)	514
Propiedad, derecho humano a la.—Véase: "DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN."	XXVII.3o. J/14 (10a.)	1451
Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO O AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNE TOTAL O PARCIALMENTE UN RÉGIMEN FISCAL OPTATIVO, CUYA IMPLEMENTACIÓN OBEDECE A FINES EXTRAFISCALES."	2a. XIII/2015 (10a.)	835
Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: "CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD."	2a./J. 26/2015 (10a.)	640
Protección de la dignidad humana, garantía de.—Véase: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU IMPACTO EN EL DESARROLLO EVOLUTIVO DE UNA DEFENSA ADECUADA Y EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA EN MATERIA PENAL."	1a. CXXXVI/2015 (10a.)	516

	Número de identificación	Pág.
Protección de la salud, derecho fundamental a la.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Razonabilidad legislativa, principio de.—Véase: "CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
Regulación asimétrica, principio de.—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA)."	I.1o.A.E.38 A (10a.)	1850
Relatividad de las sentencias de amparo, principio de.—Véase: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS."	PC.V. J/1 A (10a.)	949
Reparación del daño, derecho a la.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES CONSTITUCIONAL."	1a. CXXIX/2015 (10a.)	504

	Número de identificación	Pág.
Reposición del procedimiento penal.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Reserva de ley, principio de.—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, AL DIVIDIR LA CONTABILIDAD EN MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (LEGISLACIÓN ABROGADA)."	I.1o.A.E.41 A (10a.)	1850
Retroactividad de la jurisprudencia, principio de.—Véase: "ACTUACIONES JUDICIALES CARENTES DE FIRMA Y/O NOMBRE Y APELLIDO DE QUIENES EN ELLAS INTERVIENEN. AL CARECER DE EFICACIA JURÍDICA, DEBEN DECLARARSE INVÁLIDAS, LO QUE GENERA SU NULIDAD [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.) A LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA]."	(IX Región)1o.3 K (10a.)	1658
Retroactividad de la jurisprudencia, principio de.—Véase: "COSA JUZGADA. NO OPERA TRATÁNDOSE DEL DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA NUEVAMENTE CONTRA UNA SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN DICTADA ANTES DEL 3 DE ABRIL DE 2013, CUANDO AQUÉLLA PREVIAMENTE SE DESECHÓ POR CONSIDERARSE QUE EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA NUEVA LEY DE LA MATERIA PRECLUYÓ CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA, NO OBSTANTE QUE LA		

	Número de identificación	Pág.
PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 39/2014 (10a.), SE LLEVARA A CABO POSTERIORMENTE."	VI.2o.P.7 K (10a.)	1708
Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	2a. XVI/2015 (10a.)	834
Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "EMBARGO JUDICIAL. EL JUEZ QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DE DONDE DERIVA ESE GRAVAMEN (JUICIO NATURAL), ES EL COMPETENTE PARA DETERMINAR EXPRESAMENTE SI PROCEDE O NO, POR CADUCIDAD, LA CANCELACIÓN O LA ANOTACIÓN REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL)."	I.3o.C.186 C (10a.)	1723
Seguridad jurídica, violación al derecho a la.—Véase: "RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONERSE CONTRA LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y, EVENTUALMENTE, PROCEDE SU AMPLIACIÓN SI SE PRESENTA EN TIEMPO, PERO NO SU DUPLICIDAD CONTRA LA MISMA DETERMINACIÓN [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013]."	(I Región)1o.2 K (10a.)	1821
Seguridad pública, derecho a la.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
Subordinación jerárquica, violación al principio de.—Véase: "FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	I.1o.A.5 CS (10a.)	1729
Tutela judicial efectiva, derecho a la.—Véase: "ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO 'PADRASTRO' PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."	I.9o.P.75 P (10a.)	1655
Violación a las leyes del procedimiento penal.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856

Índice de Ordenamientos

	Número de identificación	Pág.
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, artículo 2 (D.O.F. 27-II-2014).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA SATELITAL Y TERRENAL TIENEN LA CALIDAD DE TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE CONTROVIERTAN LOS LINEAMIENTOS DE *MUST CARRY* Y *MUST OFFER*."	I.1o.A.E.51 A (10a.)	1852
Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y se delegan facultades en sus titulares, artículo 3 (D.O.F. 25-V-2005).—Véase: "ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LAS DELEGACIONES, SUBDELEGACIONES Y OFICINAS FEDERALES DEL TRABAJO DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y SE DELEGAN FACULTADES EN SUS TITULARES. SU ARTÍCULO 3 NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA PARTE		

	Número de identificación	Pág.
CORRESPONDIENTE AL CITARSE COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL."	VI.1o.A.87 A (10a.)	1660
Código Civil de Michoacán, artículos 173 y 174 (abrogado).—Véase: "COPROPIEDAD. NO EXISTE SI EL MATRIMONIO SE CELEBRA BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004)."	I.3o.C.155 C (10a.)	1707
Código Civil de Nuevo León, artículo 194.—Véase: "RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR UN MOTIVO RAZONABLE DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA, CONFORME AL ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."	IV.3o.T.27 L (10a.)	1833
Código Civil de Nuevo León, artículo 2440.—Véase: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.2o.A.81 K (10a.)	1770
Código Civil de Nuevo León, artículo 2456.—Véase: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.2o.A.81 K (10a.)	1770
Código Civil de Nuevo León, artículos 2447 y 2448.—Véase: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMI-		

	Número de identificación	Pág.
NISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.2o.A.81 K (10a.)	1770
Código Civil de Puebla, artículos 635 a 637.—Véase: "VISITA Y CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SUS PROGENITORES. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE TIENDE A PROTEGER EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS SIENDO, POR TANTO, DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.C. J/16 (10a.)	1651
Código Civil de Veracruz, artículo 343.—Véase: "GUARDA Y CUSTODIA. SI EN LA CONTIENDA DE DIVORCIO SE ESTABLECIÓ QUE LA TENDRÍA LA MADRE Y A LA MUERTE DE ÉSTA LOS ABUELOS MATERNOS LA EJERCIERON DE HECHO Y EL PADRE, EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, PRETENDE RECUPERAR AQUÉLLA, DEBE HACERLO MEDIANTE JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C.91 C (10a.)	1732
Código Civil del Distrito Federal, artículo 13.—Véase: "PERSONAS INDÍGENAS. ES INNECESARIO ATENDER A SUS COSTUMBRES, CUANDO SON PARTE EN UN JUICIO QUE INVOLUCRA UN INMUEBLE RESPECTO DEL CUAL PUEDEN EJERCER SUS PRÁCTICAS RESPECTO A LA PROPIEDAD, Y ÉSTE ESTÁ UBICADO FUERA DEL TERRITORIO DE SU COMUNIDAD (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.C.219 C (10a.)	1768
Código Civil del Distrito Federal, artículo 287.—Véase: "DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO		

	Número de identificación	Pág.
VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR LA APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HIJOS Y BIENES."	I.3o.C.171 C (10a.)	1721
Código Civil del Distrito Federal, artículo 293.—Véase: "ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO 'PADRASTRO' PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."	I.9o.P.75 P (10a.)	1655
Código Civil del Distrito Federal, artículo 1050.—Véase: "DERECHO A LA HABITACIÓN. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO COMO PARTE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA PARA LOS MENORES DE EDAD."	I.3o.C.153 C (10a.)	1719
Código Civil del Distrito Federal, artículo 1162.—Véase: "RENTAS. SI EL DEUDOR NO OPONE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES RENTÍSTICAS, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZARLA OFICIOSAMENTE."	I.3o.C.176 C (10a.)	1828
Código Civil del Distrito Federal, artículo 1839.—Véase: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA USO COMERCIAL. LAS PARTES PUEDEN ESTABLECER A QUIÉN CORRESPONDERÁ OBTENER LA LICENCIA DE USO DE SUELO, CUANDO LA LOCALIDAD ARRENDADA SE DESTINA A UN GIRO COMERCIAL DISTINTO AL PREVISTO EN AQUÉLLA."	I.3o.C.165 C (10a.)	1705
Código Civil del Distrito Federal, artículo 1843.—Véase: "ARRENDAMIENTO. EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE RENTAS,		

	Número de identificación	Pág.
NO PUEDEN CONSIDERARSE USURARIOS SI NO REBASAN LA SUERTE PRINCIPAL."	I.3o.C.170 C (10a.)	1666
Código Civil del Distrito Federal, artículo 2082.—Véase: "RESCISIÓN DE CONTRATO. LA MORA ES ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN Y PARA PROBARLA DEBE EXISTIR EL REQUERIMIENTO DE PAGO EN EL DOMICILIO DEL DEUDOR, SALVO PACTO EXPRESO EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 2082 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	**REPUBLICADA POR ACLARACIÓN** I.3o.C.690 C (9a.)	1832
Código Civil del Distrito Federal, artículo 2226.—Véase: "CONTRATO DE FIDEICOMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO."	I.3o.C.157 C (10a.)	1705
Código Civil del Distrito Federal, artículo 2412, fracción I.—Véase: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA USO COMERCIAL. LAS PARTES PUEDEN ESTABLECER A QUIÉN CORRESPONDERÁ OBTENER LA LICENCIA DE USO DE SUELO, CUANDO LA LOCALIDAD ARRENDADA SE DESTINA A UN GIRO COMERCIAL DISTINTO AL PREVISTO EN AQUÉLLA."	I.3o.C.165 C (10a.)	1705
Código Civil del Distrito Federal, artículos 291 Bis a 291 Quáter.—Véase: "ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO 'PADRASTRO' PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."	I.9o.P.75 P (10a.)	1655
Código Civil del Distrito Federal, artículos 1141 y 1142.—Véase: "RENTAS. SI EL DEUDOR NO OPONE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES		

	Número de identificación	Pág.
RENTÍSTICAS, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZARLA OFICIOSAMENTE."	I.3o.C.176 C (10a.)	1828
Código Civil Federal, artículo 2546.—Véase: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.2o.A.81 K (10a.)	1770
Código Civil Federal, artículo 2562.—Véase: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.2o.A.81 K (10a.)	1770
Código Civil Federal, artículo 3010.—Véase: "EMBARGO JUDICIAL. SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3010, 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL)."	I.3o.C.190 C (10a.)	1724
Código Civil Federal, artículo 3035.—Véase: "EMBARGO JUDICIAL. EL JUEZ QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DE DONDE DERIVA ESE GRAVAMEN (JUICIO NATURAL), ES EL COMPETENTE PARA DETERMINAR EXPRESAMENTE SI PROCEDE O NO, POR CADUCIDAD, LA CANCELACIÓN O LA ANOTACIÓN REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE		

	Número de identificación	Pág.
APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL)."	I.3o.C.186 C (10a.)	1723
Código Civil Federal, artículo 3035.—Véase: "EMBARGO JUDICIAL. SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3010, 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL)."	I.3o.C.190 C (10a.)	1724
Código Civil Federal, artículos 2553 y 2554.—Véase: "PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. ES INSUFICIENTE PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, SI NO EXISTE CLÁUSULA EXPRESA QUE FACULTE AL MANDATARIO PARA ELLO, AL NO EXISTIR GRADACIÓN O JERARQUÍA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PODERES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.2o.A.81 K (10a.)	1770
Código Civil Federal, artículos 3030 y 3031.—Véase: "EMBARGO JUDICIAL. EL JUEZ QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DE DONDE DERIVA ESE GRAVAMEN (JUICIO NATURAL), ES EL COMPETENTE PARA DETERMINAR EXPRESAMENTE SI PROCEDE O NO, POR CADUCIDAD, LA CANCELACIÓN O LA ANOTACIÓN REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL)."	I.3o.C.186 C (10a.)	1723
Código Civil Federal, artículos 3030 y 3031.—Véase: "EMBARGO JUDICIAL. SUJETOS LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 3010, 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL)."	I.3o.C.190 C (10a.)	1724

	Número de identificación	Pág.
Código de Comercio, artículo 1117.—Véase: "ACTUACIONES EN MATERIA MERCANTIL. SON VÁLIDAS LAS PRACTICADAS POR LA AUTORIDAD DECLARADA INCOMPETENTE POR DECLINATORIA Y, POR TANTO, LAS REALIZADAS POSTERIORMENTE, AL SER INDEPENDIENTES Y NO VERSE AFECTADAS DEBEN CONSERVARSE."	I.3o.C.218 C (10a.)	1657
Código de Comercio, artículo 1122.—Véase: "COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	I.3o.C.183 C (10a.)	1709
Código de Comercio, artículo 1129.—Véase: "COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	I.3o.C.183 C (10a.)	1709
Código de Comercio, artículo 1131.—Véase: "COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	I.3o.C.183 C (10a.)	1709
Código de Comercio, artículo 1198.—Véase: "PRUEBA PERICIAL. LA VISTA QUE DEBE DARSE A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN Y FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ESTÁ IMPLÍCITA CON LAS EXCEPCIONES OPUESTAS		

	Número de identificación	Pág.
POR EL ENJUICIADO Y AL CORRÉRSELE TRASLADO AL DEMANDADO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA, RESPECTIVAMENTE."	I.3o.C.154 C (10a.)	1813
Código de Comercio, artículo 1203.—Véase: "PRUEBA PERICIAL. LA VISTA QUE DEBE DARSE A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN Y FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ESTÁ IMPLÍCITA CON LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL ENJUICIADO Y AL CORRÉRSELE TRASLADO AL DEMANDADO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA, RESPECTIVAMENTE."	I.3o.C.154 C (10a.)	1813
Código de Comercio, artículo 1254.—Véase: "PRUEBA PERICIAL. LA VISTA QUE DEBE DARSE A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN Y FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ESTÁ IMPLÍCITA CON LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL ENJUICIADO Y AL CORRÉRSELE TRASLADO AL DEMANDADO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA, RESPECTIVAMENTE."	I.3o.C.154 C (10a.)	1813
Código de Comercio, artículo 1393.—Véase: "EMBARGO JUDICIAL. EL JUEZ QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JURISDICCIONAL DE DONDE DERIVA ESE GRAVAMEN (JUICIO NATURAL), ES EL COMPETENTE PARA DETERMINAR EXPRESAMENTE SI PROCEDE O NO, POR CADUCIDAD, LA CANCELACIÓN O LA ANOTACIÓN REGISTRAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y 3030, 3031 Y 3035 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA MATERIA MERCANTIL)."	I.3o.C.186 C (10a.)	1723

	Número de identificación	Pág.
Código de Comercio, artículo 1401.—Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE COMPROMETA A PRESENTARLOS."	XIX.1o.A.C.6 C (10a.)	1814
Código de Comercio, artículos 1414 Bis 12 a 1414 Bis 15.—Véase: "PRUEBA PERICIAL. LA VISTA QUE DEBE DARSE A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE EJECUCIÓN DE GARANTÍA OTORGADA MEDIANTE PRENDA SIN TRANSMISIÓN DE POSESIÓN Y FIDEICOMISO DE GARANTÍA, ESTÁ IMPLÍCITA CON LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL ENJUICIADO Y AL CORRÉRSELE TRASLADO AL DEMANDADO PARA QUE CONTESTE LA DEMANDA, RESPECTIVAMENTE."	I.3o.C.154 C (10a.)	1813
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, artículos 268 a 278.—Véase: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, artículo 4o.—Véase: "COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES."	PC.XXX. J/11 C (10a.)	1121

	Número de identificación	Pág.
Código de Procedimientos Civiles de Aguascalientes, artículos 128 y 129.—Véase: "COSTAS. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PARA SU CONDENA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES."	PC.XXX. J/11 C (10a.)	1121
Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artículo 377.—Véase: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU RESOLUCIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LO QUE SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE NUEVE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.C.57 C (10a.)	1656
Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artículo 392.—Véase: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU RESOLUCIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LO QUE SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE NUEVE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.C.57 C (10a.)	1656
Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artículos 373 y 374.—Véase: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU RESOLUCIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LO QUE SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE NUEVE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.C.57 C (10a.)	1656
Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artículos 380 y 381.—Véase: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU RESOLUCIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LO QUE SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE NUEVE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE		

	Número de identificación	Pág.
APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.C.57 C (10a.)	1656
Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artículos 384 a 388.—Véase: "ACLARACIÓN DE SENTENCIA. SU RESOLUCIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, POR LO QUE SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE NUEVE DÍAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.C.57 C (10a.)	1656
Código de Procedimientos Civiles de Querétaro, artículo 510.—Véase: "JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. EL MERO ABANDONO DEL INMUEBLE ARRENDADO NO LO DEJA SIN MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	XXII.1o.5 C (10a.)	1742
Código de Procedimientos Civiles de Querétaro, artículos 502 a 512.—Véase: "JUICIO SUMARIO DE DESAHUCIO. NO QUEDA SIN MATERIA POR LA MUERTE DEL ARRENDATARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	XXII.1o.4 C (10a.)	1742
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, artículo 104.—Véase: "COSTAS EN JUICIOS DE DIVISIÓN DE COPROPIEDAD. SU CUANTIFICACIÓN DEBE ATENDER SÓLO AL VALOR DE LA PARTE ALÍCUOTA DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE EXCLUIR DE LO INDIVISO Y NO SOBRE SU TOTALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.1o.C.21 C (10a.)	1710
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, artículo 107.—Véase: "COSTAS EN JUICIOS DE DIVISIÓN DE COPROPIEDAD. SU CUANTIFICACIÓN DEBE ATENDER SÓLO AL VALOR DE LA PARTE ALÍCUOTA DEL INMUEBLE QUE SE PRETENDE EXCLUIR		

	Número de identificación	Pág.
DE LO INDIVISO Y NO SOBRE SU TOTALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.1o.C.21 C (10a.)	1710
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 2.—Véase: "RENTAS. SI EL DEUDOR NO OPONE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PENSIONES RENTÍSTICAS, EL JUZGADOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA ANALIZARLA OFICIOSAMENTE."	I.3o.C.176 C (10a.)	1828
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 88.—Véase: "DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR LA APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HIJOS Y BIENES."	I.3o.C.171 C (10a.)	1721
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 255, fracción X.—Véase: "DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR LA APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HIJOS Y BIENES."	I.3o.C.171 C (10a.)	1721
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 260, fracción VIII.—Véase: "DIVORCIO POR		

	Número de identificación	Pág.
VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR LA APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HIJOS Y BIENES."	I.3o.C.171 C (10a.)	1721
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículos 272 A y 272 B.—Véase: "DIVORCIO POR VOLUNTAD UNILATERAL DE UNO DE LOS CÓNYUGES. EL JUEZ DEBE ESTABLECER EN LA SENTENCIA UN PLAZO PRUDENTE DE CINCO DÍAS PARA QUE LAS PARTES LE DEN CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y MANIFIESTEN Y ACREDITEN QUE HAN ACUDIDO AL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PARA INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO RESPECTO DE LOS CONVENIOS Y, EN CASO DE NO ACREDITARLO, DEBE ORDENAR LA APERTURA OFICIOSA DE LOS INCIDENTES RESPECTO DE LOS HIJOS Y BIENES."	I.3o.C.171 C (10a.)	1721
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social de Puebla, artículo 121 (texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial el 4 de enero de 2012).—Véase: "ARRAIGO. EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 4 DE ENERO DE 2012, QUE PERMITÍA DECRETARLO CONTRA EL INDICIADO, SIN ESPECIFICAR RESPECTO DE QUÉ DELITOS, VULNERA EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	VI.2o.P.21 P (10a.)	1665

	Número de identificación	Pág.
Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, artículo 182.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO)."	XVII.1o.P.A.16 P (10a.)	1847
Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, artículo 408.—Véase: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	XVII.1o.P.A. J/6 (10a.)	1527
Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, artículo 414, fracción IV.—Véase: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LA DELIMITACIÓN DE LA LITIS EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA UNA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, NO SÓLO ABARCA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, SINO TAMBIÉN EL ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO POR EL JUEZ DE GARANTÍA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)."	XVII.1o.P.A. J/6 (10a.)	1527
Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo, artículo 287, fracción IV (abrogado).—Véase: "RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES		

	Número de identificación	Pág.
INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE."	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo, artículo 295, fracción I (abrogado).—Véase: "RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE."	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
Código de Procedimientos Penales de Veracruz, artículo 202, fracción III (abrogado).—Véase: "FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA PUEDE REALIZARSE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO."	VII.4o.P.T.16 P (10a.)	1728
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículo 136.—Véase: "REDUCCIÓN DE LA PENA EN DELITOS GRAVES. EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROCEDE AUN CUANDO EL SUJETO ACTIVO HAYA CONFESADO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO EN VÍA DE PREPARATORIA, SIEMPRE QUE ÉSTA FUERE SU		

	Número de identificación	Pág.
PRIMERA OPORTUNIDAD DE DECLARAR EN TORNO AL HECHO IMPUTADO."	I.5o.P.33 P (10a.)	1825
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículo 249.—Véase: "REDUCCIÓN DE LA PENA EN DELITOS GRAVES. EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROCEDE AUN CUANDO EL SUJETO ACTIVO HAYA CONFESADO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO EN VÍA DE PREPARATORIA, SIEMPRE QUE ÉSTA FUERE SU PRIMERA OPORTUNIDAD DE DECLARAR EN TORNO AL HECHO IMPUTADO."	I.5o.P.33 P (10a.)	1825
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículo 255, fracción VI.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículo 430.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE."	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 384.—Véase: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA		

	Número de identificación	Pág.
LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA)."	I.3o.C.160 C (10a.)	1746
Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 1o., fracción VI.—Véase: "ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. LOS CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES EMANADAS DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, COMO LA ORDEN DE TRASLADO DEL SENTENCIADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO."	III.2o.P.75 P (10a.)	1657
Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 168.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXVIII/2015 (10a.)	513
Código Fiscal de la Federación, artículo 44, fracción III.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DEBE IDENTIFICARSE ANTES DE ENTRAR AL DOMICILIO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE ÉSTE."	II.3o.A.195 A (10a.)	1868
Código Fiscal de la Federación, artículo 46-A.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE		

	Número de identificación	Pág.
1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	2a. XVI/2015 (10a.)	834
Código Fiscal de la Federación, artículo 67, fracción II.—Véase: "CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA DETERMINAR DERECHOS POR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SE CONFIGURA EN EL PLAZO DE CINCO AÑOS, CONTADO A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ O DEBIÓ HABERSE PRESENTADO LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE SEA APLICABLE EL DE DIEZ, AL NO TRATARSE DE UNA CONTRIBUCIÓN CALCULADA POR EJERCICIOS."	I.1o.A.E.42 A (10a.)	1671
Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 177.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 437.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN		

	Número de identificación	Pág.
GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Código Penal de Puebla, artículo 157.—Véase: "MOTÍN. LA ACCIÓN TUMULTUARIA Y VIOLENTA DE UN GRUPO DE PERSONAS PARA IMPEDIR A LA AUTORIDAD POLICIACA LA EJECUCIÓN DE UN MANDATO DE AUTORIDAD NO CONFIGURA DICHO DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.1o.P.28 P (10a.)	1747
Código Penal del Distrito Federal, artículo 71 Ter.—Véase: "REDUCCIÓN DE LA PENA EN DELITOS GRAVES. EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROCEDE AUN CUANDO EL SUJETO ACTIVO HAYA CONFESADO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO EN VÍA DE PREPARATORIA, SIEMPRE QUE ÉSTA FUERE SU PRIMERA OPORTUNIDAD DE DECLARAR EN TORNO AL HECHO IMPUTADO."	I.5o.P.33 P (10a.)	1825
Código Penal del Distrito Federal, artículo 178, fracción II.—Véase: "ABUSO SEXUAL. ALCANCE DEL CONCEPTO 'PADRASTRO' PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."	I.9o.P.75 P (10a.)	1655
Código Penal del Distrito Federal, artículo 200.—Véase: "VIOLENCIA FAMILIAR. AL ELEMENTO NORMATIVO DE ESTE DELITO, RELACIONADO CON LA REFERENCIA ESPACIAL, CONSISTENTE EN QUE LA CONDUCTA SE DESPLIEGUE 'DENTRO O FUERA DEL DOMICILIO O LUGAR QUE HABITE' DEBE DÁRSELE UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.79 P (10a.)	1867

	Número de identificación	Pág.
Código Penal del Distrito Federal, artículo 206 bis.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Código Penal del Estado de México, artículo 26, fracción III.—Véase: "REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SÓLO CUANDO NO EXISTEN PRUEBAS DIRECTAS QUE SIRVAN DE PARÁMETRO PARA FIJAR SU MONTO, ES APLICABLE EL QUE DE FORMA SUBSIDIARIA ESTABLECE (EN DÍAS MULTA) EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO."	II.2o.P.32 P (10a.)	1829
Código Penal Federal, artículo 250 bis 1, fracción I.—Véase: "POSESIÓN DE UNIFORMES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FALSIFICADOS. EL ARTÍCULO 250 BIS 1, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ DICHO DELITO NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL."	I.9o.P.78 P (10a.)	1771
Código Urbano de Jalisco, artículo 3o.—Véase: "PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA."	III.2o.A.62 A (10a.)	1770
Código Urbano de Jalisco, artículo 10.—Véase: "PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA."	III.2o.A.62 A (10a.)	1770

	Número de identificación	Pág.
Código Urbano de Jalisco, artículo 138.—Véase: "PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA."	III.2o.A.62 A (10a.)	1770
Constitución Política de Jalisco, artículo 77, fracción III.—Véase: "PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA."	III.2o.A.62 A (10a.)	1770
Constitución Política de Jalisco, artículo 80.—Véase: "PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA."	III.2o.A.62 A (10a.)	1770
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES."	I.1o.A.E.48 A (10a.)	1655
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "ARRENDAMIENTO. EL MONTO DE LOS INTERESES MORATORIOS GENERADOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE RENTAS, NO PUEDEN CONSIDERARSE USURARIOS SI NO REBASAN LA SUERTE PRINCIPAL."	I.3o.C.170 C (10a.)	1666
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE		

	Número de identificación	Pág.
SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "CULPABILIDAD. LA PONDERACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SENTENCIADO PARA DISTINGUIR 'EL BIEN DEL MAL' COMO UN ASPECTO PARA DETERMINAR SU GRADO, ES UNA PRÁCTICA CONTRARIA AL PARADIGMA DEL DERECHO PENAL DE ACTO."	VI.2o.P.24 P (10a.)	1712
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN."	XXVII.3o. J/14 (10a.)	1451
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD."	2a./J. 27/2015 (10a.)	641
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "PRINCIPIO PRO PERSONA.		

	Número de identificación	Pág.
ÚNICAMENTE ES APLICABLE PARA INTERPRETAR LA NORMA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y NO PARA INSTAURAR UN CRITERIO SOBRE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS."	(IV Región)2o.1 CS (10a.)	1788
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE COMPROMETA A PRESENTARLOS."	XIX.1o.A.C.6 C (10a.)	1814
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "REDUCCIÓN DE LA PENA EN DELITOS GRAVES. EL BENEFICIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 71 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PROCEDE AUN CUANDO EL SUJETO ACTIVO HAYA CONFESADO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL ILÍCITO EN VÍA DE PREPARATORIA, SIEMPRE QUE ÉSTA FUERE SU PRIMERA OPORTUNIDAD DE DECLARAR EN TORNO AL HECHO IMPUTADO."	I.5o.P.33 P (10a.)	1825
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92)."	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLI-		

	Número de identificación	Pág.
COS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NO DEBE INTERPRETARSE AL GRADO DE TENER POR ACREDITADO UN DELITO QUE NO SATISFACE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL RESPECTIVO."	I.9o.P.76 P (10a.)	1737
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON		

	Número de identificación	Pág.
SUS PADRES. SU DERECHO DE SER OÍDOS PUEDE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA VIDEOLLAMADA, VÍA *SKYPE*, EN SALVAGUARDA DE SU INTERÉS SUPERIOR, CUANDO LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL LUGAR DEL JUICIO Y SU RESIDENCIA LE OCASIONE VIAJAR Y REALIZAR GASTOS."	I.3o.C.174 C (10a.)	1826
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIA. ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, EL JUEZ PUEDE DECRETARLA Y COMO COMPLEMENTO EL SOMETIMIENTO A UN PROCESO TERAPÉUTICO (PADRES E HIJOS) A FIN DE RELACIONARSE ADECUADAMENTE, SIN QUE ELLO CAUSE UN PERJUICIO IRREPARABLE AL PROGENITOR, RESPECTO DEL CUAL SE DECRETÓ LA MEDIDA."	I.3o.C.163 C (10a.)	1846
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5o.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6o.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FE-		

	Número de identificación	Pág.
DERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8o.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	1a./J. 8/2015 (10a.)	478
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8o.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	1a./J. 8/2015 (10a.)	478

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	2a. XVI/2015 (10a.)	834
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "GUARDA Y CUSTODIA. SI EN LA CONTIENDA DE DIVORCIO SE ESTABLECIÓ QUE LA TENDRÍA LA MADRE Y A LA MUERTE DE ÉSTA LOS ABUELOS MATERNOS LA EJERCIERON DE HECHO Y EL PADRE, EN EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD, PRETENDE RECUPERAR AQUÉLLA, DEBE HACERLO MEDIANTE JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C.91 C (10a.)	1732

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "POSESIÓN DE UNIFORMES DE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA FALSIFICADOS. EL ARTÍCULO 250 BIS 1, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL QUE PREVÉ DICHO DELITO NO VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL."	I.9o.P.78 P (10a.)	1771
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE."	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "ARRAIGO. EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 4 DE ENERO DE 2012, QUE PERMITÍA DECRETARLO CONTRA EL INDICIADO, SIN ESPECIFICAR RESPECTO DE QUÉ DELITOS, VULNERA EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	VI.2o.P.21 P (10a.)	1665
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL		

	Número de identificación	Pág.
15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	2a. XVI/2015 (10a.)	834
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "CONTRIBUCIONES. LAS OBLIGACIONES FORMALES DESVINCULADAS DE SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AL NO ESTAR EXENTAS DE ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD LEGISLATIVA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1o., 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	XXVII.3o. J/26 (10a.)	1373
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA PUEDE REALIZARSE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO."	VII.4o.P.T.16 P (10a.)	1728
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DE LAS PARTES DE SEÑALAR EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS, NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SIEMPRE QUE EN EL LIBELO SE SEÑALEN SUS NOMBRES Y APELLIDOS, Y EL OFERENTE SE COMPROMETA A PRESENTARLOS."	XIX.1o.A.C.6 C (10a.)	1814
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME A LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, MORELOS Y AFINES, QUIEN PRESENTA QUEJAS O DENUNCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS		

	Número de identificación	Pág.
OBLIGACIONES DE AQUÉLLOS TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE PRONUNCIARSE Y NOTIFICAR EL ACUERDO QUE RECAIGA AL ESCRITO O COMPARECENCIA RELATIVO."	2a./J. 25/2015 (10a.)	827
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 37, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LABORAL NO VIOLA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (ORDENAMIENTO ABROGADO POR EL REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y APLICACIÓN DE SANCIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN VIGOR A LOS TRES MESES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN)."	VI.1o.A.88 A (10a.)	1839
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DEBE IDENTIFICARSE ANTES DE ENTRAR AL DOMICILIO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA INVIOLABILIDAD DE ÉSTE."	II.3o.A.195 A (10a.)	1868
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA PROTECCIÓN DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL DEBE EXTENDERSE A LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS DE TUTELA NO JURISDICCIONAL QUE TENGAN POR OBJETO ATENDER UNA SOLICITUD, AUN CUANDO ÉSTA NO INVOLUCRE UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES."	I.1o.A.E.48 A (10a.)	1655
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA		

	Número de identificación	Pág.
JUSTICIA [ABANDONO DE LAS TESIS 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) Y 2a. LXXVI/2014 (10a.) (*)]."	2a. XXII/2015 (10a.)	833
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	1a./J. 8/2015 (10a.)	478
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."	XXVII.1o.1 A (10a.)	1717
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA."	1a./J. 7/2015 (10a.)	480
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ESTÁ OBLIGADO A RESPETAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS PROCEDIMIENTOS EN MA-		

	Número de identificación	Pág.
TERIA DE INTERCONEXIÓN INICIADOS A INSTANCIA DE PARTE."	I.1o.A.E.49 A (10a.)	1735
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA."	XXVII.1o. J/1 (10a.)	1426
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI UN JUEZ DE GARANTÍA, EN AUXILIO DEL QUE SIGUE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL QUEJOSO SEÑALA A AMBOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, PROCEDE DECRETAR AQUÉL POR LO QUE HACE A QUIEN ACTUÓ EN AUXILIO, SIN NECESIDAD DE OTORGARLE LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN TANTO QUE DICHO SOBRESEIMIENTO NO LE CAUSA PERJUICIO."	XVII.2o.P.A.13 P (10a.)	1843
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO)."	XVII.1o.P.A.16 P (10a.)	1847
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracción V (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008).—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430		

	Número de identificación	Pág.
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE."	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B, fracción I.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO ES APLICABLE AL JUICIO RELATIVO."	1a./J. 23/2015 (10a.)	331
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B, fracción II.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B, fracción IV (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008).—Véase: "REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. SÓLO CUANDO NO EXISTEN PRUEBAS DIRECTAS QUE SIRVAN DE PARÁMETRO PARA FIJAR SU MONTO, ES APLICABLE EL QUE DE FORMA SUBSIDIARIA ESTABLECE (EN DÍAS MULTA) EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO."	II.2o.P.32 P (10a.)	1829
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES CONSTITUCIONAL."	1a. CXXIX/2015 (10a.)	504

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO."	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXVIII/2015 (10a.)	513
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXXVII/2015 (10a.)	514
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL		

	Número de identificación	Pág.
CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción I.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXX/2015 (10a.)	505
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción I.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA AUTONOMÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENTRE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO Y EL PENAL NO ES ABSOLUTA, SINO RELATIVA."	1a./J. 21/2015 (10a.)	340
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	1a./J. 20/2015 (10a.)	330
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL CÓNYUGE QUE AFIRMA TENER DERECHOS REALES SOBRE EL BIEN SUJETO A EXTINCIÓN, APOYADO EN LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE LO UNE CON EL DEMANDADO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERVENIR EN EL JUICIO RELATIVO, AUNQUE TAL RÉGIMEN PATRIMONIAL NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD."	1a. CXXVI/2015 (10a.)	506
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. ELEMENTOS QUE DEBE DEMOS-		

	Número de identificación	Pág.
TRAR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA."	1a./J. 19/2015 (10a.)	333
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, INCISO B, DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TORNO AL 'OCULTAMIENTO'."	1a. CXXXI/2015 (10a.)	510
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a./J. 15/2015 (10a.)	337
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA PUEDE SER ACREDITADA POR EL AFECTADO CON LOS ELEMENTOS DE PRUEBA O INDICIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE, RAZONABLEMENTE, CONDUZCAN AL JUZGADOR A LA CONVICCIÓN DE QUE SU ORIGEN ES LEGAL."	1a./J. 17/2015 (10a.)	342
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracción II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. RELEVANCIA DE LA PRUEBA DE LA PROCEDENCIA LÍCITA DEL BIEN MATERIA DE LA ACCIÓN RELATIVA."	1a./J. 16/2015 (10a.)	346
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracciones I y II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. POR REGLA GENERAL, LA ACCIÓN RELATIVA ESTÁ SUJETA A QUE EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL EMITA ALGUNA DECISIÓN EN LA QUE AFIRME QUE LOS HECHOS CONSIGNADOS		

	Número de identificación	Pág.
ACREDITAN EL CUERPO DEL DELITO DE ALGUNO DE LOS ILÍCITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL."	1a./J. 22/2015 (10a.)	344
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22, fracciones II y III.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN TORNO A LAS CARGAS PROBATORIAS CUANDO HAY UN AFECTADO QUE ADUCE SER DE BUENA FE."	1a./J. 18/2015 (10a.)	335
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN		

	Número de identificación	Pág.
TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO O AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE SE IMPUGNE TOTAL O PARCIALMENTE UN RÉGIMEN FISCAL OPTATIVO, CUYA IMPLEMENTACIÓN OBEDECE A FINES EXTRAFISCALES."	2a. XIII/2015 (10a.)	835
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD."	2a./J. 26/2015 (10a.)	640
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41.—Véase: "GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SUS ATRIBUCIONES, EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL, SON TAMBIÉN DEL ENCARGADO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO."	XI.1o.A.T.46 A (10a.)	1731
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, base I.—Véase: "PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO."	XXVII.3o.77 K (10a.)	1763

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción XXI.—Véase: "ARRAIGO. EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 4 DE ENERO DE 2012, QUE PERMITÍA DECRETARLO CONTRA EL INDICIADO, SIN ESPECIFICAR RESPECTO DE QUÉ DELITOS, VULNERA EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	VI.2o.P.21 P (10a.)	1665
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89, fracción I.—Véase: "FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	I.1o.A.5 CS (10a.)	1729
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 103, fracción I.—Véase: "DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SU DISTINCIÓN."	XXVII.3o. J/14 (10a.)	1451
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción I.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO."	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción II.—Véase: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL		

	Número de identificación	Pág.
ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS."	PC.V. J/1 A (10a.)	949
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción III.—Véase: "AMPARO ADHESIVO. LO QUE JUSTIFICA SU ESTUDIO ES LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PRINCIPAL."	XI.1o.A.T.20 K (10a.)	1661
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción III.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES. ORDEN EN QUE DEBEN PLANTEARSE PARA SU ESTUDIO EN EL AMPARO DIRECTO."	I.3o.C.83 K (10a.)	1866
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción IV.—Véase: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	2a./J. 19/2015 (10a.)	783
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción IX.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES SOSTENIDAS EN JUICIOS DE AMPARO RESUELTOS PREVIAMENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE RECONOCIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CUYA INVALIDEZ IMPUGNA EL RECURREN-		

	Número de identificación	Pág.
TE HASTA EL ESCRITO DE REVISIÓN, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO."	2a. XIX/2015 (10a.)	840
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracciones III, V y VI.—Véase: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 6/2015 (10a.)	95
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN		

	Número de identificación	Pág.
ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES."	2a. XVII/2015 (10a.)	839
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115, fracción V.—Véase: "PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE GUADALAJARA, JALISCO. IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA."	III.2o.A.62 A (10a.)	1770
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122, base primera, fracción V.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ES COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA."	1a./J. 14/2015 (10a.)	422
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123.—Véase: "CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES FUNDAMENTAL EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL REALIZADA POR LA JUNTA RESPONSABLE, DADA SU ESPECIAL RELEVANCIA."	P. V/2015 (10a.)	160
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PER-		

	Número de identificación	Pág.
CEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XVIII.—Véase: "CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL LAUDO QUE LOS RESUELVE, PERMITE AL JUZGADOR EXAMINAR NO SÓLO LOS ASPECTOS FORMALES DE ESA DECISIÓN, SINO INCLUSO, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA ACTORA."	P. IV/2015 (10a.)	159
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XXIII.—Véase: "CRÉDITO PREFERENTE EN MATERIA LABORAL. TIENE ESE CARÁCTER EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS."	(V Región)5o.22 L (10a.)	1711
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XXIII.—Véase: "CRÉDITOS PREFERENTES EN MATERIA LABORAL. LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAS VACACIONES NO TIENEN ESE CARÁCTER."	(V Región)5o.21 L (10a.)	1712
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XXVII.—Véase: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABAN-		

	Número de identificación	Pág.
DONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)."	2a./J. 17/2015 (10a.)	699
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XI.—Véase: "SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL."	I.6o.T. J/21 (10a.)	1628
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA."	I.1o.A.94 A (10a.)	1842
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XIV.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	2a. XV/2015 (10a.)	841
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartados A, fracción XXII y B.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a. XIV/2015 (10a.)	842

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartados A, fracción XXII y B, fracción XIII.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO."	I.1o.A. J/6 (10a.)	1620
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134.—Véase: "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. LA FALTA DE FIRMA COMO SIGNO NECESARIO DE LA EXPRESIÓN DE VOLUNTAD DE QUIEN DEBE OBLIGARSE AL PAGO, NO PUEDE SUBSANARSE CON PRUEBAS INDIRECTAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR)."	I.3o.C.177 C (10a.)	1706
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134.—Véase: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3o. y 4o.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA		

	Número de identificación	Pág.
LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 13 y 14.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 16 y 17.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos, cláusula 24.—Véase: "PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA QUE PROCEDA LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DERIVADA DE UNA INVESTI-		

	Número de identificación	Pág.
GACIÓN ADMINISTRATIVA, DEBE NOTIFICARSE A LA SECCIÓN SINDICAL CORRESPONDIENTE CON 3 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A SU APLICACIÓN (CLÁUSULA 24 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO)."	I.9o.T.43 L (10a.)	1769
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1, numeral 1.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5, numerales 1 y 2.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7, numeral 3.—Véase: "FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ABROGADO, AL ESTABLECER QUE LA DETENCIÓN DE LA PERSONA PUEDE REALIZARSE DENTRO DE LAS CUARENTA Y OCHO HORAS POSTERIORES A LA COMISIÓN DEL HECHO DELICTIVO, VULNERA EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO."	VII.4o.P.T.16 P (10a.)	1728
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2.—Véase: "REPOSICIÓN DEL		

	Número de identificación	Pág.
PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE."	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2.—Véase: "RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE."	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 19.—Véase: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NO DEBE INTERPRETARSE AL GRADO DE TENER POR ACREDITADO UN DELITO QUE NO SA-		

	Número de identificación	Pág.
TISFACE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL RESPECTIVO."	I.9o.P.76 P (10a.)	1737
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 4.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 15.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículos 1 y 2.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículos 12 y 13.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856

	Número de identificación	Pág.
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 10.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículos 1 y 2.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículos 6 y 8.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12.—Véase: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES. SU DERECHO DE SER OÍDOS PUEDE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA VIDEOLLAMADA, VÍA *SKYPE*, EN SALVAGUARDA DE SU INTERÉS SUPERIOR, CUANDO LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL LUGAR DEL JUICIO Y SU RESIDENCIA LE OCASIONE VIAJAR Y REALIZAR GASTOS."	I.3o.C.174 C (10a.)	1826
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XI.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO		

	Número de identificación	Pág.
DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Decreto por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997, artículo octavo transitorio (D.O.F. 12-I-2012).—Véase: "FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL 'DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997', DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012."	2a./J. 20/2015 (10a.)	760
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Na-		

	Número de identificación	Pág.
cional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo octavo transitorio (D.O.F. 6-I-1997).—Véase: "FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL 'DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997', DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012."	2a./J. 20/2015 (10a.)	760
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, artículo octavo transitorio, fracción I (D.O.F. 11-VI-2013).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA SATELITAL Y TERRENAL TIENEN LA CALIDAD DE TERCEROS INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE CONTROVIERTAN LOS LINEAMIENTOS DE *MUST CARRY* Y *MUST OFFER*."	I.1o.A.E.51 A (10a.)	1852
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, artículo octavo transitorio, fracción III (D.O.F. 11-VI-2013).—Véase: "RADIODIFUSIÓN. LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU RESOLUCIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA CUAL DETERMINÓ A UN GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO COMO AGENTE PREPONDERANTE EN		

	Número de identificación	Pág.
ESE SECTOR, AL SER OBLIGATORIAS PARA LOS MIEMBROS DE ÉSTE, SUS CAUSAHABIENTES O CESIONARIOS DE SUS DERECHOS O QUIENES RESULTEN DE REESTRUCTURAS CORPORATIVAS O MODIFICACIONES ACCIONARIAS DERIVADAS DE CONCENTRACIONES DE CUALQUIER TIPO A AGENTES VINCULADOS CON ÉL, SON IDÓNEAS Y RAZONABLES PARA ALCANZAR LA FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PROPIA RESOLUCIÓN."	I.1o.A.E.45 A (10a.)	1820
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículo 6o.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículo 55.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículo 57.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 57, INCISO B), DEL ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.6o.T.129 L (10a.)	1863
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Baja California Sur, artículos 49 a 53.—Véase: "CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN		

	Número de identificación	Pág.
DE BIENES Y SERVICIOS. LA FALTA DE FIRMA COMO SIGNO NECESARIO DE LA EXPRESIÓN DE VOLUNTAD DE QUIEN DEBE OBLIGARSE AL PAGO, NO PUEDE SUBSANARSE CON PRUEBAS INDIRECTAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 49, 50, 51, 52 Y 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR)."	I.3o.C.177 C (10a.)	1706
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 55.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 61 Bis.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720

	Número de identificación	Pág.
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 87, fracción III.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 106, fracciones I y II.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Ley de Amparo, artículo 1o., fracción I.—Véase: "INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."	XXVII.3o.75 K (10a.)	1734
Ley de Amparo, artículo 2o.—Véase: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL,		

	Número de identificación	Pág.
AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 6/2015 (10a.)	95
Ley de Amparo, artículo 3o.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823
Ley de Amparo, artículo 3o.—Véase: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	I.1o.A.23 K (10a.)	1830
Ley de Amparo, artículo 5o.—Véase: "AMPARO ADHESIVO. EL TERCERO INTERESADO QUE LO PROMUEVE NO SE CONVIERTE EN UN QUEJOSO ADHERENTE, SINO QUE CONSERVA ESE CARÁCTER."	XXVII.3o.76 K (10a.)	1660
Ley de Amparo, artículo 5o.—Véase: "PARTIDOS POLÍTICOS. LAS ACCIONES U OMISIONES QUE DESPLIEGAN COMO ENTES DE INTERÉS PÚBLICO, NO SON RECLAMABLES EN EL JUICIO DE AMPARO."	XXVII.3o.77 K (10a.)	1763
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción II.—Véase: "BOLSA MEXICANA DE VALORES, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE. SU PRESIDENTE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD		

	Número de identificación	Pág.
RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."	I.1o.A.25 K (10a.)	1669
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción II.—Véase: "INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."	XXVII.3o.75 K (10a.)	1734
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción III.—Véase: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO."	I.3o.C.74 K (10a.)	1855
Ley de Amparo, artículo 7o.—Véase: "LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA TIENE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA PROMOVERLO CONTRA LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA QUE PUEDE AFECTAR EL INMUEBLE EN EL QUE REALIZA SUS FUNCIONES, OTORGADA CON APOYO EN UNA LEY ANTE LA QUE SE ENCUENTRA EN UN PLANO DE IGUALDAD CON QUIEN GESTIONÓ A SU FAVOR EL ACTO."	(V Región)5o.24 K (10a.)	1743
Ley de Amparo, artículo 12.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO. EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO."	(I Región)4o.5 K (10a.)	1837
Ley de Amparo, artículo 17, fracción II.—Véase: "COSA JUZGADA. NO OPERA TRATÁNDOSE DEL		

	Número de identificación	Pág.
DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA NUEVAMENTE CONTRA UNA SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN DICTADA ANTES DEL 3 DE ABRIL DE 2013, CUANDO AQUÉLLA PREVIAMENTE SE DESECHÓ POR CONSIDERARSE QUE EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA NUEVA LEY DE LA MATERIA PRECLUYÓ CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA, NO OBSTANTE QUE LA PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 39/2014 (10a.), SE LLEVARA A CABO POSTERIORMENTE."	VI.2o.P.7 K (10a.)	1708
Ley de Amparo, artículo 21.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823
Ley de Amparo, artículo 23.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 26, fracción II.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823
Ley de Amparo, artículo 28, fracción II.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823
Ley de Amparo, artículo 34.—Véase: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 6/2015 (10a.)	95
Ley de Amparo, artículo 37.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DETERMINAR Y CALIFICAR EN DEFINITIVA UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. AL TRATARSE DE UN ACTO		

	Número de identificación	Pág.
NEGATIVO QUE NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL, AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA."	I.3o.P.23 P (10a.)	1694
Ley de Amparo, artículo 45.—Véase: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 6/2015 (10a.)	95
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XVIII.—Véase: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO (RECURSO DE DUDOSA PROCEDENCIA)."	I.3o.C.160 C (10a.)	1746
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XX.—Véase: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NO ES SUSCEPTIBLE DE INVOCARSE COMO NOTORIA Y MANIFIESTA, Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE HASTA QUE AQUÉLLA SE ADMITE Y LA LITIS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA."	I.3o.P.26 P (10a.)	1750
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XX.—Véase: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES		

	Número de identificación	Pág.
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	2a./J. 19/2015 (10a.)	783
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XXI.—Véase: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]."	II.1o.18 P (10a.)	1693
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XXIII.—Véase: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XXXIII.—Véase: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), INTERPRETADO A		

	Número de identificación	Pág.
CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.25 P (10a.)	1749
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]."	II.1o.18 P (10a.)	1693
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO."	P./J. 4/2015 (10a.)	6
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN."	P./J. 5/2015 (10a.)	8
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO EN REVISIÓN. LA REGLA		

	Número de identificación	Pág.
PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO RIGE CUANDO ES LA PROPIA QUEJOSA QUIEN SOLICITA SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO."	XXIV.1o.3 K (10a.)	1733
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO INDIRECTO. EN CASO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTUDIE LA CAUSA ADUCIDA POR ALGUNA DE LAS PARTES AL SOBRESEER POR UN MOTIVO DISTINTO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA ESA DETERMINACIÓN, PUEDE ACOGER AQUÉLLA SIN NECESIDAD DE DAR VISTA PREVIAMENTE AL RECURRENTE PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	VII.1o.A. J/1 (10a.)	1505
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI UN JUEZ DE GARANTÍA, EN AUXILIO DEL QUE SIGUE LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, DICTÓ EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y EL QUEJOSO SEÑALA A AMBOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, PROCEDE DECRETAR AQUÉL POR LO QUE HACE A QUIEN ACTUÓ EN AUXILIO, SIN NECESIDAD DE OTORGARLE LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN TANTO QUE DICHO SOBRESEIMIENTO NO LE CAUSA PERJUICIO."	XVII.2o.P.A.13 P (10a.)	1843
Ley de Amparo, artículo 76 Bis, fracción IV (abrogada).—Véase: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. SÓLO PROCEDE APLICARLA CUANDO LE BENEFICIE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."	P. VI/2015 (10a.)	161
Ley de Amparo, artículo 80 (abrogada).—Véase: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES HETEROAPLICATIVAS. SUS EFECTOS COMPRENDEN ÚNICAMENTE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES		

	Número de identificación	Pág.
ENTERADAS, RETENIDAS O DESCONTADAS DESDE EL ACTO DE APLICACIÓN QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO, Y LAS SUBSECUENTES, SIN QUE PUEDAN HACERSE EXTENSIVOS A LOS ACTOS PREVIOS."	PC.V. J/1 A (10a.)	949
Ley de Amparo, artículo 81, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AUNQUE SÓLO PRETENDA IMPUGNARSE LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	II.2o.A.1 K (10a.)	1822
Ley de Amparo, artículo 81, fracción II.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES SOSTENIDAS EN JUICIOS DE AMPARO RESUELTOS PREVIAMENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LOS QUE RECONOCIÓ LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA CUYA INVALIDEZ IMPUGNA EL RECURRENTE HASTA EL ESCRITO DE REVISIÓN, NO CONSTITUYE UN SUPUESTO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO."	2a. XIX/2015 (10a.)	840
Ley de Amparo, artículo 88.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 93, fracción IV.—Véase: "CONSTANCIAS REMITIDAS CON EL INFORME JUSTIFICADO. NO PUEDE NEGARSE AL QUEJOSO IMPONERSE DE ÉSTAS, AUN CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) LAS HAYA ESTIMADO COMO RESERVADAS, SI PUEDE ELABORAR UNA VERSIÓN DE AQUÉLLAS PARA PONERSE A LA VISTA DE LAS PARTES, Y SIN VIOLAR EL SIGILO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA –DE DONDE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO–, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	II.2o.P.14 K (10a.)	1703
Ley de Amparo, artículo 93, fracción VII.—Véase: "PRUEBAS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. CONFORME AL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SON ADMISIBLES LAS QUE TIENDEN A DESESTIMAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL."	VI.2o.P.6 K (10a.)	1815
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONERSE CONTRA LA CONCESIÓN O NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y, EVENTUALMENTE, PROCEDE SU AMPLIACIÓN SI SE PRESENTA EN TIEMPO, PERO NO SU DUPLICIDAD CONTRA LA MISMA DETERMINACIÓN [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013]."	(I Región)1o.2 K (10a.)	1821
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AUNQUE SÓLO PRETENDA IMPUGNARSE LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE		

	Número de identificación	Pág.
SURTA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	II.2o.A.1 K (10a.)	1822
Ley de Amparo, artículo 97, fracción II.—Véase: "QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA PROVEER SOBRE EL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI AQUÉLLA JUSTIFICA QUE REALIZÓ LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA TURNARLA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO."	XX.2o.3 K (10a.)	1817
Ley de Amparo, artículo 107, fracción III.—Véase: "LICITACIÓN PÚBLICA. CONTRA LOS ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN ESTE PROCEDIMIENTO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.IV.A. J/8 A (10a.)	1261
Ley de Amparo, artículo 107, fracción III.—Véase: "LICITACIÓN PÚBLICA. EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO, PROMOVIDO CONTRA ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS EN AQUEL PROCEDIMIENTO, NO CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI SE SURTE UNA CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA."	PC.IV.A. J/9 A (10a.)	1262
Ley de Amparo, artículo 107, fracción III.—Véase: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.25 P (10a.)	1749

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 107, fracción IV.—Véase: "REMATE. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESAPRUEBA, POR SER AUTÓNOMA Y AJENA A LA COSA JUZGADA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [MODIFICACIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.13o.C.7 K (10a.)]."	I.13o.C.16 C (10a.)	1827
Ley de Amparo, artículo 107, fracción V.—Véase: "COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	I.3o.C.183 C (10a.)	1709
Ley de Amparo, artículo 107, fracción V.—Véase: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA."	XXVII.1o. J/1 (10a.)	1426
Ley de Amparo, artículo 107, fracciones V y VIII.—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)]."	(V Región)5o.20 L (10a.)	1663
Ley de Amparo, artículo 112.—Véase: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUS-		

	Número de identificación	Pág.
PENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	2a./J. 19/2015 (10a.)	783
Ley de Amparo, artículo 114, fracciones II a IV (abrogada).—Véase: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	1a./J. 8/2015 (10a.)	478
Ley de Amparo, artículo 115.—Véase: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO."	I.3o.C.74 K (10a.)	1855
Ley de Amparo, artículo 117.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE TENERSE COMO FECHA DE SU PRESENTACIÓN, AQUELLA EN QUE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS DE MÉXICO PARA SU REMISIÓN VÍA CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE O TERCERA INTERESADA TIENE SU DOMICILIO OFICIAL FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DEL JUICIO DE AMPARO, NO ASÍ LA FECHA EN QUE ÉSTE LO RECIBIÓ."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** (I Región)4o.3 K (10a.)	1823

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 117.—Véase: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INCORRECTO DECRETARLO POR NEGATIVA DE ACTOS, AL NO CONSTITUIR ÉSTA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."	I.3o.P.2 K (10a.)	1844
Ley de Amparo, artículo 122.—Véase: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. AUN CUANDO ESTÁ RELACIONADA CON UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SÓLO PUEDE SER PROMOVIDO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO HASTA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL."	I.1o.A.21 K (10a.)	1733
Ley de Amparo, artículo 128.—Véase: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
Ley de Amparo, artículo 128.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Ley de Amparo, artículo 130.—Véase: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS		

	Número de identificación	Pág.
DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
Ley de Amparo, artículo 132.—Véase: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
Ley de Amparo, artículo 132.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AUNQUE SÓLO PRETENDA IMPUGNARSE LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	II.2o.A.1 K (10a.)	1822
Ley de Amparo, artículo 135.—Véase: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 136.—Véase: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
Ley de Amparo, artículo 136.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, AUNQUE SÓLO PRETENDA IMPUGNARSE LO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	II.2o.A.1 K (10a.)	1822
Ley de Amparo, artículo 144.—Véase: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	XVI.1o.A. J/19 (10a.)	1536
Ley de Amparo, artículo 149.—Véase: "SUSPENSIÓN. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ DIRIGIDA AL JUEZ CONSTITUCIONAL Y NO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE."	I.3o.C.76 K (10a.)	1845

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 159, fracción X (abrogada).—Véase: "ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X –PRIMERA PARTE–, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN."	PC.V. J/3 A (10a.)	1014
Ley de Amparo, artículo 162.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO)."	XVII.1o.P.A.16 P (10a.)	1847
Ley de Amparo, artículo 166, fracción I.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO)."	XVII.1o.P.A.16 P (10a.)	1847
Ley de Amparo, artículo 170.—Véase: "AMPARO ADHESIVO. EL TERCERO INTERESADO QUE LO PROMUEVE NO SE CONVIERTE EN UN QUEJOSO ADHERENTE, SINO QUE CONSERVA ESE CARÁCTER."	XXVII.3o.76 K (10a.)	1660
Ley de Amparo, artículo 170.—Véase: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO		

	Número de identificación	Pág.
ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 6/2015 (10a.)	95
Ley de Amparo, artículo 170, fracción I.—Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA)."	(V Región)5o.18 P (10a.)	1761
Ley de Amparo, artículo 170, fracción II.—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS APLICADOS AL QUEJOSO EN UNA SENTENCIA DE NULIDAD PREVIA A LA RECLAMADA, DICTADA ÉSTA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL, AL NO HABER CONTROVERTIDO PREVIAMENTE ESE ASPECTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA."	IV.2o.A.82 K (10a.)	1695
Ley de Amparo, artículo 170, fracción II.—Véase: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ANÁLISIS QUE DEBEN REALIZAR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA."	2a. XXIII/2015 (10a.)	836
Ley de Amparo, artículo 170, fracción II.—Véase: "RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU CONCEPTO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2014 (10a.) (*)]."	2a. XXI/2015 (10a.)	837

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 170, fracciones I y II.—Véase: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA [ABANDONO DE LAS TESIS 2a. LXXVII/2014 (10a.), 2a. LXXV/2014 (10a.) Y 2a. LXXVI/2014 (10a.) (*)]."	2a. XXII/2015 (10a.)	833
Ley de Amparo, artículo 171.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES. ORDEN EN QUE DEBEN PLANTEARSE PARA SU ESTUDIO EN EL AMPARO DIRECTO."	I.3o.C.83 K (10a.)	1866
Ley de Amparo, artículo 172, fracción II.—Véase: "FALSA REPRESENTACIÓN. NO SE ACTUALIZA ESA VIOLACIÓN PROCESAL EN CASO DE QUE UNA DE LAS PARTES HUBIERA TENIDO UN DEFICIENTE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN UN JUICIO POR PARTE DEL PROFESIONISTA QUE DESIGNÓ PARA SU DEFENSA."	I.1o.A.24 K (10a.)	1727
Ley de Amparo, artículo 173, fracciones VIII y XXII.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Ley de Amparo, artículo 182.—Véase: "AMPARO ADHESIVO. EL TERCERO INTERESADO QUE LO PROMUEVE NO SE CONVIERTE EN UN QUEJOSO ADHERENTE, SINO QUE CONSERVA ESE CARÁCTER."	XXVII.3o.76 K (10a.)	1660
Ley de Amparo, artículo 182.—Véase: "AMPARO ADHESIVO. LO QUE JUSTIFICA SU ESTUDIO ES LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL PRINCIPAL."	XI.1o.A.T.20 K (10a.)	1661

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 182.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE POR CUANTO VE A LA ACCIÓN PRINCIPAL LAS HACE VALER EN AMPARO DIRECTO, LA TRASCENDENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN DEBE ACOTARSE ÚNICAMENTE A LA PARTE DEL FALLO QUE NO LE RESULTÓ BENÉFICO."	(IX Región)1o.5 K (10a.)	1865
Ley de Amparo, artículo 189.—Véase: "VIOLACIONES DE FONDO. AUNQUE ÉSTAS RESULTARAN FUNDADAS Y GENERARAN UN MAYOR BENEFICIO, CUANDO LA RESPONSABLE INCURRA EN UNA VIOLACIÓN FORMAL AL NO ESTUDIAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL DEMANDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, A FIN DE DEPURAR LOS TEMAS QUE DEBAN QUEDAR FIRMES Y LOGRAR UNA PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AL EVITAR UNA MULTIPLICIDAD DE AMPAROS, DEBE OCUPARSE DEL ANÁLISIS DE AMBAS INFRACCIONES."	I.3o.C.78 K (10a.)	1865
Ley de Amparo, artículo 217.—Véase: "ACTUACIONES JUDICIALES CARENTES DE FIRMA Y/O NOMBRE Y APELLIDO DE QUIENES EN ELLAS INTERVIENEN. AL CARECER DE EFICACIA JURÍDICA, DEBEN DECLARARSE INVÁLIDAS, LO QUE GENERA SU NULIDAD [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 151/2013 (10a.) A LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA]."	(IX Región)1o.3 K (10a.)	1658
Ley de Amparo, artículo 217.—Véase: "COSA JUZGADA. NO OPERA TRATÁNDOSE DEL DESECHAMIENTO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDA NUEVAMENTE CONTRA UNA SENTENCIA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN DICTADA ANTES DEL 3 DE ABRIL DE 2013, CUANDO AQUÉLLA PREVIAMENTE SE DESECHÓ POR CONSIDERARSE QUE EL PLAZO DE HASTA OCHO AÑOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA NUEVA LEY DE LA		

	Número de identificación	Pág.
MATERIA PRECLUYÓ CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA, NO OBSTANTE QUE LA PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 39/2014 (10a.), SE LLEVARA A CABO POSTERIORMENTE."	VI.2o.P.7 K (10a.)	1708
Ley de Amparo, artículo 260, fracción II.—Véase: "INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."	XXVII.3o.75 K (10a.)	1734
Ley de Amparo, artículo 260, fracción IV.—Véase: "QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA PROVEER SOBRE EL TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI AQUÉLLA JUSTIFICA QUE REALIZÓ LAS ACTUACIONES PERTINENTES PARA TURNARLA AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO."	XX.2o.3 K (10a.)	1817
Ley de Amparo, artículo sexto transitorio (D.O.F. 2-IV-2013).—Véase: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LOS HEREDEROS POTENCIALES DE LA VÍCTIMA ESTÁN LEGITIMADOS PARA RECLAMAR LA INDEMNIZACIÓN RELATIVA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 21/92)."	I.3o.C.191 C (10a.)	1834
Ley de Amparo, artículo décimo transitorio (D.O.F. 2-IV-2013).—Véase: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA SU NEGATIVA CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA, ES UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCESO PENAL Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (ALCANCE DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA)."	(V Región)5o.18 P (10a.)	1761

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículos 4o. y 5o.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DESESTIMÓ SU PRETENSIÓN EN EL JUICIO RELATIVO."	1a. CXXVII/2015 (10a.)	508
Ley de Amparo, artículos 9o. y 10.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO. EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO."	(I Región)4o.5 K (10a.)	1837
Ley de Amparo, artículos 112 a 115.—Véase: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES APLICABLE EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA, CUANDO SE ADVIERTE DE OFICIO UNA CAUSAL DISTINTA A LA EXAMINADA POR EL JUEZ DE DISTRITO."	P./J. 4/2015 (10a.)	6
Ley de Amparo, artículos 115 a 118.—Véase: "INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO."	XXVII.3o.75 K (10a.)	1734
Ley de Concursos Mercantiles, artículo 20, fracción I.—Véase: "CONCURSO MERCANTIL. LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN RELATIVA DEBE ACOMPAÑARSE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO REGISTRADO ANTE LAS AUTORIDADES HACENDARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA)."	I.3o.C.180 C (10a.)	1700
Ley de Concursos Mercantiles, artículo 20, fracción VII.—Véase: "CONCURSO MERCANTIL. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES LA SOLICITUD DE SU DECLARACIÓN, DEBE ACOMPAÑARSE DE UN		

	Número de identificación	Pág.
DOCUMENTO PÚBLICO DONDE CONSTE LA MANIFESTACIÓN DE LOS SOCIOS PARA DECLARARSE EN MORA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN VII, DE LA LEY RELATIVA)."	I.3o.C.179 C (10a.)	1701
Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, artículo 2, fracción VIII.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	1a./J. 20/2015 (10a.)	330
Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, artículo 4.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. CONCEPTO DE HECHO ILÍCITO PARA EFECTOS DE LA ACCIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	1a./J. 20/2015 (10a.)	330
Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, artículos 11 a 14.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXXVII/2015 (10a.)	514
Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, artículos 16 a 18.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 11 A 14 Y 16 A 18 DE LA LEY RELATIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXXVII/2015 (10a.)	514
Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, articulo 3, fracción I.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE ACTOS PREPARATORIOS DE LA ACCIÓN RESPECTIVA, CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES		

	Número de identificación	Pág.
ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."	1a. CXXXII/2015 (10a.)	512
Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, artículo 12.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LA COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DE ACTOS PREPARATORIOS DE LA ACCIÓN RESPECTIVA, CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."	1a. CXXXII/2015 (10a.)	512
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, artículo 1.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, artículo 4.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, artículo 32.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY RESPECTIVA PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, CUYA TRANSGRESIÓN PUEDA DAR LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O A DESESTIMAR LA PRETENSIÓN."	1a. CXXV/2015 (10a.)	510
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, artículo 52.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL		

	Número de identificación	Pág.
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, artículo tercero transitorio.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA EJERCER ESTA ACCIÓN POR CONDUCTO DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	1a. CXXIV/2015 (10a.)	507
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, artículo 9o.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD."	2a./J. 26/2015 (10a.)	640
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, artículo 9o.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9o., ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD."	2a./J. 27/2015 (10a.)	641
Ley de la Policía Federal, artículo 26, fracción XIX.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DECRETA LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE UN ELEMENTO POR INCUMPLIR UN REQUISITO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN."	I.1o.A.96 A (10a.)	1824

	Número de identificación	Pág.
Ley de la Policía Federal, artículo 39.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DECRETA LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE UN ELEMENTO POR INCUMPLIR UN REQUISITO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN."	I.1o.A.96 A (10a.)	1824
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Sonora, artículo 122 Bis, fracción III.—Véase: "LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA TIENE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA PROMOVERLO CONTRA LA EXPEDICIÓN DE UNA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GASOLINERA QUE PUEDE AFECTAR EL INMUEBLE EN EL QUE REALIZA SUS FUNCIONES, OTORGADA CON APOYO EN UNA LEY ANTE LA QUE SE ENCUENTRA EN UN PLANO DE IGUALDAD CON QUIEN GESTIONÓ A SU FAVOR EL ACTO."	(V Región)5o.24 K (10a.)	1743
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Jalisco, artículo 69, fracciones II a VI (vigente hasta el 18 de octubre de 2012).—Véase: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SUSTENTADOS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIONES II, PÁRRAFO PRIMERO, INCISO D), III, PÁRRAFO ÚLTIMO, IV, V Y VI, INCISO C), DE LA LEY RELATIVA, DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO ENTRE LA NOTIFICACIÓN AL CONGRESO LOCAL DE LA SENTENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE DECLARÓ LA INVALIDEZ DE DICHAS PORCIONES NORMATIVAS Y LA ENTRADA EN VIGOR DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 18 DE OCTUBRE DE 2012, DEBEN DECLARARSE NULOS."	III.1o.A.20 A (10a.)	1835

	Número de identificación	Pág.
Ley de Seguridad Pública de Nuevo León, artículo 158.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Ley de Seguridad Pública de Nuevo León, artículo 221.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Ley de Seguridad Pública de Nuevo León, artículo 223.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE		

	Número de identificación	Pág.
RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Ley de Seguridad Pública de Nuevo León, artículo 229.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Ley de Seguridad Pública de Nuevo León, artículos 198 Bis 30 y 198 Bis 31.—Véase: "SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN."	PC.IV.A. J/11 A (10a.)	1088
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, artículo 27.—Véase: "FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	I.1o.A.5 CS (10a.)	1729
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Sonora, artículo 60 Bis B. —Véase:		

	Número de identificación	Pág.
"PENSIONADOS O JUBILADOS. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA NO COMPRENDE ACTOS ANTERIORES A AQUEL QUE MOTIVÓ LA PROMOCIÓN DEL JUICIO."	PC.V. J/2 A (10a.)	951
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 7.—Véase: "SEGURIDAD SOCIAL. ES INEXTINGUIBLE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO A QUE SE LES RECONOZCA SU ANTIGÜEDAD LABORAL."	I.6o.T. J/21 (10a.)	1628
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 66 (abrogada).—Véase: "PENSIÓN POR EDAD Y AÑOS DE SERVICIO. SI DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA SE CUMPLEN ALGUNOS DE LOS REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO, PERO LA CONDICIÓN RELATIVA A LA EDAD DEL TRABAJADOR (55 AÑOS EXIGIDOS EN AQUEL TIEMPO) SE CUMPLIÓ UNA VEZ QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY ACTUAL, LA SOLICITUD RELATIVA, DEBE RESOLVERSE CONFORME A ESTA ÚLTIMA."	PC.XXX. J/12 A (10a.)	1345
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo 40.—Véase: "FONDOS ACUMULADOS EN LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. EL INFONAVIT DEBE ENTREGARLOS INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA DEMANDA SE HUBIERA PRESENTADO ANTES O DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMAS AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL 'DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE		

	Número de identificación	Pág.
1997', DIFUNDIDO EN ESE MEDIO OFICIAL EL 12 DE ENERO DE 2012."	2a./J. 20/2015 (10a.)	760
Ley del Seguro Social, artículo 33 (derogada).—Véase: "PENSIÓN ANUAL DE VEJEZ. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA BÁSICA MENSUAL E INCREMENTOS ANUALES, DEBE ATENDERSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167 DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL."	I.6o.T.130 L (10a.)	1764
Ley del Seguro Social, artículo 167 (derogada).—Véase: "PENSIÓN ANUAL DE VEJEZ. PARA DETERMINAR LA CUANTÍA BÁSICA MENSUAL E INCREMENTOS ANUALES, DEBE ATENDERSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167 DE LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL."	I.6o.T.130 L (10a.)	1764
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 3, fracción IX.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a. XIV/2015 (10a.)	842
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 3o., fracción IX.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	2a. XV/2015 (10a.)	841
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 10, fracción X.—		

	Número de identificación	Pág.
Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA SE INTEGRA A RAZÓN DE 3 MESES DE SUELDO, POR APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a. XIV/2015 (10a.)	842
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 10, fracciones I y X.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	2a. XV/2015 (10a.)	841
Ley del Sistema de Seguridad Pública de Jalisco, artículo 47.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Ley Federal de Derechos, artículo 239.—Véase: "CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES PARA DETERMINAR DERECHOS POR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SE CONFIGURA EN EL PLAZO DE CINCO AÑOS, CONTADO A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ O DEBIÓ HABERSE PRESENTADO LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, SIN QUE SEA APLICABLE EL DE DIEZ, AL NO TRATARSE DE UNA CONTRIBUCIÓN CALCULADA POR EJERCICIOS."	I.1o.A.E.42 A (10a.)	1671
Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los		

	Número de identificación	Pág.
Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, fracción II.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXVIII/2015 (10a.)	513
Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 10.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES CONSTITUCIONAL."	1a. CXXIX/2015 (10a.)	504
Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 45, fracción I.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN II, Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE IDENTIFICAN HECHO ILÍCITO CON CUERPO DEL DELITO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXVIII/2015 (10a.)	513
Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 50.—Véase: "EXTINCIÓN DE DOMINIO. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CXXX/2015 (10a.)	505
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 5o., fracción II.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN CUYAS FUNCIONES SEAN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ADS-		

	Número de identificación	Pág.
CRITOS AL ÁREA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA, DEBEN SER CONSIDERADOS CON AQUEL CARÁCTER."	I.6o.T.127 L (10a.)	1860
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 6o.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESPONDE ACREDITARLA A ÉSTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 67/2010)."	I.3o.T.28 L (10a.)	1857
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 8o.—Véase: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY RELATIVA NO COMPRENDE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS."	2a. XV/2015 (10a.)	841
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 15, fracciones II y III.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESPONDE ACREDITARLA A ÉSTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 67/2010)."	I.3o.T.28 L (10a.)	1857
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 46, fracción II.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESPONDE ACREDITARLA A ÉSTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 67/2010)."	I.3o.T.28 L (10a.)	1857
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículos 63 a 65.—Véase: "TRABAJADORES AL		

	Número de identificación	Pág.
SERVICIO DEL ESTADO. LA EXCEPCIÓN DEL DEMANDADO CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL, CORRESPONDE ACREDITARLA A ÉSTE (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 67/2010)."	I.3o.T.28 L (10a.)	1857
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 60.—Véase: "SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 37, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LABORAL NO VIOLA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (ORDENAMIENTO ABROGADO POR EL REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y APLICACIÓN DE SANCIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN VIGOR A LOS TRES MESES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN)."	VI.1o.A.88 A (10a.)	1839
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 15, fracción VI.—Véase: "DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL ESTABLECER LA CONSECUENCIA DE TENERLA POR NO PRESENTADA CUANDO EL PROMOVENTE NO SEÑALE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO EN CASO DE NO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SU NOTIFICACIÓN O HABERSE PRACTICADO ÉSTA POR CORREO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA."	XXVII.1o.1 A (10a.)	1717
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 28, fracción III.—Véase: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III,		

	Número de identificación	Pág.
INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	2a./J. 19/2015 (10a.)	783
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 59.—Véase: "RECURSO DE RECLAMACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI SE INTERPONE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA, SU MATERIA COMPRENDE TAMBIÉN EL PROVEÍDO DE PREVENCIÓN DEL QUE DERIVA."	XXVII.1o. J/1 (10a.)	1426
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 21, fracción V.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS."	2a. XVIII/2015 (10a.)	838
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 21, fracción V.—Véase: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V,		

	Número de identificación	Pág.
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES."	2a. XVII/2015 (10a.)	839
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 9-A, fracción XI (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA)."	I.1o.A.E.38 A (10a.)	1850
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 44, fracción IV (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE DETERMINADOS CONCESIONARIOS UTILICEN UN FORMATO SIMPLIFICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, NO EXCEDE LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA."	I.1o.A.E.39 A (10a.)	1849
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 44, fracción IV (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA)."	I.1o.A.E.38 A (10a.)	1850
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 44, fracción IV (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA NO ESTABA OBLIGADA A ESTABLECER		

	Número de identificación	Pág.
LA METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, CON BASE EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD QUE LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS UTILIZAN HABITUALMENTE PARA EFECTOS DISTINTOS."	I.1o.A.E.40 A (10a.)	1851
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 68 (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE DETERMINADOS CONCESIONARIOS UTILICEN UN FORMATO SIMPLIFICADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, NO EXCEDE LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA."	I.1o.A.E.39 A (10a.)	1849
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 68 (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, AL DIVIDIR LA CONTABILIDAD EN MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY (LEGISLACIÓN ABROGADA)."	I.1o.A.E.41 A (10a.)	1850
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 68 (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. EL MANUAL QUE PROVEE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, APLICABLE A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS RELATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE REGULACIÓN ASIMÉTRICA (LEGISLACIÓN ABROGADA)."	I.1o.A.E.38 A (10a.)	1850
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 68 (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL DE LA MATERIA NO		

	Número de identificación	Pág.
ESTABA OBLIGADA A ESTABLECER LA METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE POR SERVICIO, CON BASE EN LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD QUE LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS UTILIZAN HABITUALMENTE PARA EFECTOS DISTINTOS."	I.1o.A.E.40 A (10a.)	1851
Ley Federal del Trabajo, artículo 2o.—Véase: "CONFLICTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL LAUDO QUE LOS RESUELVE, PERMITE AL JUZGADOR EXAMINAR NO SÓLO LOS ASPECTOS FORMALES DE ESA DECISIÓN, SINO INCLUSO, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA ACTORA."	P. IV/2015 (10a.)	159
Ley Federal del Trabajo, artículo 5o.—Véase: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)."	2a./J. 17/2015 (10a.)	699
Ley Federal del Trabajo, artículo 33.—Véase: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010)."	2a./J. 17/2015 (10a.)	699
Ley Federal del Trabajo, artículo 36.—Véase: "TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. DE LOS HECHOS NARRADOS EN SU DEMANDA PUEDE DERIVARSE LA PRESUNCIÓN DE QUE SU TRABAJO ES POR OBRA DETERMINADA."	VI.1o.T.5 L (10a.)	1861

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal del Trabajo, artículo 39.—Véase: "PRÓRROGA DEL CONTRATO LABORAL. SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE MANERA SUBSIDIARIA A LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO."	I.13o.T.118 L (10a.)	1811
Ley Federal del Trabajo, artículo 47 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR UN MOTIVO RAZONABLE DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA, CONFORME AL ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."	IV.3o.T.27 L (10a.)	1833
Ley Federal del Trabajo, artículo 48 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "PRÓRROGA DEL CONTRATO LABORAL. SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE DEMANDA DE MANERA SUBSIDIARIA A LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO."	I.13o.T.118 L (10a.)	1811
Ley Federal del Trabajo, artículo 84.—Véase: "CRÉDITO PREFERENTE EN MATERIA LABORAL. TIENE ESE CARÁCTER EL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS."	(V Región)5o.22 L (10a.)	1711
Ley Federal del Trabajo, artículo 157.—Véase: "PREFERENCIA DE DERECHOS EN MATERIA LABORAL. A EFECTO DE COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTORIO DE LA ACCIÓN, ES INSUFICIENTE ACREDITAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DE QUIEN SE LE ASIGNÓ EL PUESTO DEMANDADO."	I.13o.T.119 L (10a.)	1787
Ley Federal del Trabajo, artículo 162.—Véase: "CRÉDITOS PREFERENTES EN MATERIA LABORAL. LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y LAS VACACIONES NO TIENEN ESE CARÁCTER."	(V Región)5o.21 L (10a.)	1712
Ley Federal del Trabajo, artículo 185.—Véase: "RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR UN		

	Número de identificación	Pág.
MOTIVO RAZONABLE DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA, CONFORME AL ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."	IV.3o.T.27 L (10a.)	1833
Ley Federal del Trabajo, artículo 692, fracción II.—Véase: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. PARA ACREDITAR EL CARÁCTER DE ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO PUEDE PRESENTARSE CÉDULA PROFESIONAL, FEDERAL O ESTATAL, EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE."	XVII.1o.C.T.45 L (10a.)	1768
Ley Federal del Trabajo, artículo 784, fracción VIII.—Véase: "JORNADA EXTRAORDINARIA. LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE AL TRABAJADOR CUANDO LA RECLAMADA EXCEDE DE 9 HORAS SEMANALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	I.9o.T.44 L (10a.)	1741
Ley Federal del Trabajo, artículo 841.—Véase: "TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. DE LOS HECHOS NARRADOS EN SU DEMANDA PUEDE DERIVARSE LA PRESUNCIÓN DE QUE SU TRABAJO ES POR OBRA DETERMINADA."	VI.1o.T.5 L (10a.)	1861
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 3o.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 7o.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE		

	Número de identificación	Pág.
UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Ley General de Salud, artículo 475, fracción II.—Véase: "DELITO CONTRA LA SALUD. NO SE ACREDITA LA MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN EN SU HIPÓTESIS DE COMPRA AGRAVADA (POR ENCONTRARSE EL INCULPADO A MENOS DE TRESCIENTOS METROS DE UN CENTRO EDUCATIVO), SINO LA DIVERSA DE POSESIÓN SIMPLE, SI QUIEN LO COMETIÓ ES FARMACODEPENDIENTE Y LA CANTIDAD QUE ADQUIRIÓ ES MENOR O IGUAL A LA PREVISTA EN LA TABLA DE ORIENTACIÓN DE DOSIS MÁXIMAS DE CONSUMO PERSONAL E INMEDIATO."	I.9o.P.77 P (10a.)	1716
Ley General de Salud, artículos 474 a 477.—Véase: "RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE."	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
Ley General de Salud, artículos 477 a 479.—Véase: "DELITO CONTRA LA SALUD. NO SE ACREDITA LA MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN EN SU HIPÓTESIS DE COMPRA AGRAVADA (POR ENCONTRARSE EL INCULPADO A MENOS DE TRESCIENTOS METROS DE UN CENTRO EDUCATIVO), SINO LA DIVERSA DE POSESIÓN SIMPLE, SI QUIEN LO COMETIÓ ES FARMACODEPENDIENTE Y LA CANTIDAD QUE ADQUIRIÓ ES MENOR O IGUAL A LA PREVISTA		

	Número de identificación	Pág.
EN LA TABLA DE ORIENTACIÓN DE DOSIS MÁXIMAS DE CONSUMO PERSONAL E INMEDIATO."	I.9o.P.77 P (10a.)	1716
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 174.—Véase: "INTERESES USURARIOS. EL ELEMENTO NOTORIEDAD RESULTA INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN OFICIOSA DE LOS PACTADOS."	I.3o.C.189 C (10a.)	1738
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 389.—Véase: "CONTRATO DE FIDEICOMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO."	I.3o.C.157 C (10a.)	1705
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículo 391.—Véase: "CONTRATO DE FIDEICOMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO."	I.3o.C.157 C (10a.)	1705
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículos 381 y 382.—Véase: "CONTRATO DE FIDEICOMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO."	I.3o.C.157 C (10a.)	1705
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículos 384 a 386.—Véase: "CONTRATO DE FIDEI-		

	Número de identificación	Pág.
COMISO. SE PRODUCE SU NULIDAD ABSOLUTA CUANDO EL FIDEICOMITENTE APORTA UN BIEN CUYO DERECHO DE PROPIEDAD ADQUIRIÓ POR VIRTUD DE UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL Y ÉSTA QUEDA SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO SOLICITADO POR UN TERCERO EXTRAÑO."	I.3o.C.157 C (10a.)	1705
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 5, fracciones X y XIII.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA."	I.1o.A.94 A (10a.)	1842
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 60.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE ESE TIPO DE CORPORACIONES, ASÍ COMO DE SUPRIMIR LA INSCRIPCIÓN DE SU SEPARACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, SE DEBE CONSIDERAR QUE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ INJUSTIFICADA TAL DECISIÓN CONSTITUYE, POR SÍ, UNA FORMA DE REPARACIÓN."	I.1o.A.95 A (10a.)	1840
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 60.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA."	I.1o.A.94 A (10a.)	1842
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 74.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA.		

	Número de identificación	Pág.
ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA."	I.1o.A.94 A (10a.)	1842
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 85, fracción I.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. ES IMPROCEDENTE ORDENAR LA SUPRESIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS AGENTES DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS DEL REGISTRO NACIONAL CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO ESA DECISIÓN HAYA SIDO DECLARADA INJUSTIFICADA."	I.1o.A.94 A (10a.)	1842
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, artículo 3, fracción XVI.—Véase: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 107, FRACCIÓN III, INCISO A), INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.25 P (10a.)	1749
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, artículo 3, fracción XVI.—Véase: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, APROBACIÓN DEL. SI PREVIO A RECLAMAR DICHA DETERMINACIÓN EN AMPARO INDIRECTO NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, PORQUE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA NO ES SUSCEPTIBLE DE INVOCARSE COMO NOTORIA		

	Número de identificación	Pág.
Y MANIFIESTA, Y SÓLO PUEDE ANALIZARSE HASTA QUE AQUÉLLA SE ADMITE Y LA LITIS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA."	I.3o.P.26 P (10a.)	1750
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 37, fracción I.—Véase: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 6/2015 (10a.)	95
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, artículo 14, fracción IV.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A LA SOLICITUD DE UNA PERSONA MORAL PARA QUE SE LE COLOQUE EN 'SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES', AL NO CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA."	PC.XIII. J/2 A (10a.)	1161
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 41, apartado A.—Véase: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DE LOS MENORES DE EDAD CON SUS PADRES. SU DERECHO DE SER OÍDOS PUEDE CUMPLIRSE A TRAVÉS DE LA VIDEOLLAMADA, VÍA *SKYPE*, EN SALVAGUARDA DE SU INTERÉS SUPERIOR, CUANDO LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL LUGAR DEL JUICIO Y SU RESIDENCIA LE OCASIONE VIAJAR Y REALIZAR GASTOS."	I.3o.C.174 C (10a.)	1826
Observación General No.14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización		

	Número de identificación	Pág.
de las Naciones Unidas, artículo 12.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, punto 56.—Véase: "DERECHO AL AGUA. LA FACULTAD ESTABLECIDA EN FAVOR DE LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL ARTÍCULO 177, TERCER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL PARA REALIZAR EL CORTE PARCIAL DEL SUMINISTRO DE ESE LÍQUIDO EN TOMAS DE USO DOMÉSTICO, ESTÁ SUPEDITADA AL CUMPLIMIENTO PREVIO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE AGUAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN LA OBSERVACIÓN GENERAL No. 15 DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS."	I.1o.A.99 A (10a.)	1720
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7.—Véase: "TORTURA. LA OMISIÓN DE INDAGAR LA DENUNCIA REFERIDA POR PERSONAS DISTINTAS AL INCULPADO, QUE INTERVINIERON EN ALGUNA FASE PROCEDIMENTAL CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."	I.5o.P.32 P (10a.)	1856
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral 3.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA PORCIÓN NORMATIVA		

	Número de identificación	Pág.
QUE ESTABLECE QUE NO SE DECRETARÁ DE OFICIO, ES INCONVENCIONAL Y DEBE INAPLICARSE."	I.7o.P. J/2 (10a.)	1590
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, numeral 5.—Véase: "RESOLUCIONES DICTADAS EN DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO QUE CONTEMPLAN LOS ARTÍCULOS 474 A 477 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN ABROGACIÓN PAULATINA, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLAS SON IRREVOCABLES Y CAUSAN EJECUTORIA, ES INCONVENCIONAL Y, POR TANTO, DEBE INAPLICARSE."	XXVII.3o.14 P (10a.)	1834
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del Año 2014, numeral 7.4.1. (G.O. 30-VI-2014)—Véase: "VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA."	I.1o.A. J/7 (10a.)	1641
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del Año 2014, numeral 7.4.1. (G.O. 30-VI-2014)—Véase: "VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL NUMERAL 7.4.1. DEL PROGRAMA RELATIVO PARA		

	Número de identificación	Pág.
EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014, VIOLA EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, AL PREVER UNA DISTINCIÓN INJUSTIFICADA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ATENDIENDO ÚNICAMENTE AL MODELO, CON INDEPENDENCIA DE SU NIVEL DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES."	I.1o.A. J/8 (10a.)	1642
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", artículos 9 y 10.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO."	III.1o.A.19 A (10a.)	1844
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, artículo 13.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, artículo 20.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE		

	Número de identificación	Pág.
SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, artículos 4 y 5.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, artículos 26 y 27.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO		

	Número de identificación	Pág.
LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículo 13, fracción XX.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DECRETA LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE UN ELEMENTO POR INCUMPLIR UN REQUISITO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN."	I.1o.A.96 A (10a.)	1824
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículo 42, fracción XLVIII.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL DECRETA LA SEPARACIÓN DEL SERVICIO DE UN ELEMENTO POR INCUMPLIR UN REQUISITO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN."	I.1o.A.96 A (10a.)	1824
Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, artículo 16.—Véase: "FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	I.1o.A.5 CS (10a.)	1729
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículo 30.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ANALIZAR ASPECTOS TÉCNICOS,		

	Número de identificación	Pág.
SOLICITADA POR LOS PERITOS PARA ELABORAR SU DICTAMEN."	I.1o.A.E.27 K (10a.)	1812
Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, artículo 37 (abrogado).—Véase: "SEGURIDAD JURÍDICA. EL ARTÍCULO 37, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO GENERAL PARA LA INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES POR VIOLACIONES A LA LEGISLACIÓN LABORAL NO VIOLA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL (ORDENAMIENTO ABROGADO POR EL REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y APLICACIÓN DE SANCIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2014, EN VIGOR A LOS TRES MESES SIGUIENTES A SU PUBLICACIÓN)."	VI.1o.A.88 A (10a.)	1839
Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, artículo 2.—Véase: "SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN."	PC.IV.A. J/11 A (10a.)	1088
Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, artículo 9.—Véase: "SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN."	PC.IV.A. J/11 A (10a.)	1088
Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad		

	Número de identificación	Pág.
Guadalupe, Nuevo León, artículo 95.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086
Reglamento Interior de Trabajo de los Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, artículos 92 a 94.—Véase: "SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN."	PC.IV.A. J/11 A (10a.)	1088
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, artículo 18, fracciones XIV, XXXIV y XXXV.—Véase: "COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA IMPONER LAS SANCIONES A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, POR LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE A LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PREVISTOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO, O CUANDO LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DÉ LUGAR A SU DESTITUCIÓN O INHABILITACIÓN."	PC.IV.A. J/12 A (10a.)	1086

	Número de identificación	Pág.
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, artículo 18, fracciones XIV, XXXIV y XXXV.—Véase: "SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ES COMPETENTE PARA INICIAR Y RESOLVER EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O CESE DE LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A DICHA SECRETARÍA, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA CORPORACIÓN."	PC.IV.A. J/11 A (10a.)	1088
Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, artículo 39.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	2a. XVI/2015 (10a.)	834
Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, artículos 46 a 48.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	2a. XVI/2015 (10a.)	834

	Número de identificación	Pág.
Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, artículos 53 a 56.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	2a. XVI/2015 (10a.)	834
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, artículo 506.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. EL ARTÍCULO 506 DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y LAS REGLAS 39, 46 A 48 Y 53 A 56 DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA ADUANERA DEL CITADO TRATADO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	2a. XVI/2015 (10a.)	834